

En la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas del día 12 de septiembre de 2018, se reunieron en el salón de sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ubicado en Viaducto Tlalpan número 100, esquina Periférico Sur, Colonia Arenal Tepepan, a fin de celebrar sesión extraordinaria del Consejo General las señoras y señores: Doctor Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente; Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, Consejeros Electorales; Diputado Marco Antonio Gómez Alcántar, Consejero del Poder Legislativo; Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra, representante propietario del Partido Acción Nacional (así como la representante suplente, Licenciada Joanna Alejandra Felipe Torres); Ciudadano Emilio Suárez Licon, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional (así como el representante suplente, Ciudadano Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez); Ciudadano Camerino Eleazar Márquez Madrid, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática; Maestro Pedro Vázquez González, representante propietario del Partido del Trabajo; Licenciado Jorge Herrera Martínez, representante propietario del Partido Verde Ecologista de México (así como el representante suplente, Licenciado Fernando Garibay Palomino); Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, representante propietario de Movimiento Ciudadano; Maestro Luis Castro Obregón, representante propietario de Nueva Alianza; Licenciado Horacio Duarte Olivares, representante propietario de MORENA (así como el representante suplente, Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas) y Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante propietario de Encuentro Social (así como el representante suplente, Ciudadano Hugo Eric Flores Cervantes). Asimismo, concurre a la sesión el Licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario del Consejo del Instituto Nacional Electoral._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Buenas tardes. Señoras y señores, Consejeros y representantes, damos inicio a la sesión extraordinaria del Consejo General, convocada para el día de hoy, por lo que le pido al Secretario del Consejo, verifique si hay quórum legal para sesionar._____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero Presidente, para efectos de la sesión extraordinaria del Consejo General de esta fecha hay una asistencia inicial de 18 Consejeros y representantes, por lo que existe quórum para su realización._____

Consejero Presidente, señoras y señores Consejeros y representantes, me permito informar a ustedes que mediante oficio de fecha 6 de septiembre de presente, suscrito por la Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgo, Secretaria de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Diputados, se acredita al Diputado Marco Antonio Gómez Alcantar como Consejero Propietario del Poder Legislativo, por la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México._____

Es el caso que estando presente, procede tomarle la protesta de Ley, por lo que ruego a todos ustedes ponerse de pie._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Diputado Marco Antonio Gómez Alcantar, Consejero Propietario del Poder Legislativo por la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ¿protesta usted guardar y hacer guardad la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partidos Políticos y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado?_____

El C. Consejero Marco Antonio Gómez Alcantar: ¡Sí protesto!_____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Estoy convencido que a través de su profesionalismo y calidad con la que se desempeñará en esta importante encomienda se garantizara el cumplimiento permanente de los principios que rigen a la función electoral en beneficio de la consolidación de la democracia mexicana, sea usted bienvenido._____

Continúe con la sesión, Secretario del Consejo._____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero Presidente, me permito solicitar su autorización para que esta Secretaria consulte si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente con el

propósito de evitar la votación de permiso correspondiente, y así entrar directamente a la consideración de los asuntos._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Por favor Secretario del Consejo, proceda a formular la consulta sobre la dispensa que propone._____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales, está a su consideración la propuesta para que se dispense la lectura de los documentos que contiene a los asuntos previamente circulados, y así entrar directamente a la consideración de los mismos en su caso._____
Los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la mano, por favor._____

Aprobada por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo._____

Continúe con la sesión, por favor._____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto se refiere al orden del día, Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras, señores Consejeros y representantes está a su consideración el orden de día._____

Al no haber intervenciones, por favor Secretario del Consejo, en votación económica consulte si se aprueba el mismo._____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día._____

Los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la mano, por favor._____

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela

Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.

(Texto del orden del día aprobado)

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

CONSEJO GENERAL

SESIÓN EXTRAORDINARIA

ORDEN DEL DÍA

12 DE SEPTIEMBRE DE 2018

12:00 HORAS

1.- Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto a diversas quejas por hechos que se considera constituyen infracciones a la Ley en la Materia. (Comisión de Quejas y Denuncias)

1.1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se declara infundado el procedimiento ordinario sancionador con número de expediente UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016 instaurado por Claudia Carrillo Gasca, en su carácter de Consejera Electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo, en contra de la Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina, de los Consejeros Electorales del propio Instituto, Juan Manuel Pérez Alpuche, Thalía Hernández Robledo; así como de Alfredo Figueroa Orea, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social; José Luis González Nolasco, Director de Partidos Políticos y Radiodifusión; Luis Alberto Alcocer Anguiano, Director de Organización y Víctor Manuel Interián López, Director de Administración, todos del Instituto Electoral referido, así como de Armando Miguel Palomo Gómez, representante del Partido Nueva Alianza; Juan Alberto Manzanilla Lagos, representante del Partido Revolucionario Institucional y Mauricio Morales Beiza, representante del Partido del Trabajo, todos ante el Consejo General del mismo Instituto Electoral local, toda vez que del análisis de los hechos denunciados no se advierte que existan elementos que permitan a esta autoridad

concluir que los actos u omisiones atribuidas a los sujetos denunciados constituyan, acoso laboral o violencia política por razones de género en contra de la quejosa_____

1.2.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017 que se deriva de diversas quejas presentadas por noventa y un ciudadanos (91), quienes presentaron escritos por los cuales, cada uno de ellos, hizo del conocimiento de esta autoridad hechos presuntamente contraventores de la normatividad electoral, relacionados con la aparición de ciudadanos que aspiraban al cargo de supervisor electoral y/o capacitador asistente electoral, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, y que se encontraron en el padrón del Partido del Trabajo presuntamente sin su consentimiento._____

1.3.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/AOS/CG/52/2017, iniciado con motivo de sendas denuncias en contra del Partido Acción Nacional, por supuestas violaciones a la normativa electoral, consistentes en la indebida afiliación al citado instituto político de diversos ciudadanos y, en su caso, el uso no autorizado de sus datos personales._____

1.4.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/SSN/CG/57/2017 instaurado con motivo de las quejas presentadas por Sergio Loaiza Gómez, Gloria del Carmen Tanori Ferrales y Miguel Ángel Hernández Estrada en contra del Partido Verde Ecologista de México, por la supuesta afiliación indebida y la utilización de datos personales presuntamente sin su consentimiento._____

1.5.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/AMBN/JL/SIN/27/2018, iniciado con motivo de sendas denuncias en contra del Partido Acción Nacional, por supuestas violaciones a la normativa electoral, consistentes en la indebida afiliación al citado instituto político de dos ciudadanas y, en su caso, el uso no autorizado de sus datos personales._____

1.6.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente

UT/SCG/Q/JD04/CHS/35/2018 aperturado con motivo de las quejas presentadas ante esta autoridad electoral a través de sendos oficios signados por diversos servidores públicos de órganos desconcentrados de este Instituto en diversas entidades federativas, a través de los cuales hicieron del conocimiento de esta autoridad, hechos presuntamente contraventores de la normatividad electoral, relacionados con la aparición de ciudadanos, aspirantes al cargo de supervisores electorales y/o capacitadores asistentes electorales, que se encontraron en el padrón del partido político Acción Nacional presuntamente sin su consentimiento._____

1.7.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/GOP/JD03/BC/37/2018 que se deriva de diversas quejas presentadas por diecisiete ciudadanos (17), en contra del Partido del Trabajo, por supuestas violaciones a la normativa electoral, consistentes en su afiliación indebida al citado instituto político y, en su caso, el uso no autorizado de sus datos y documentos personales._____

1.8.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/JRN/J/CD01/QROO/40/2018, iniciado con motivo de los escritos de queja signados por Janeth Ríos Nolasco, María Del Carmen Jiménez Hernández, Luis Alberto García Sosa, Juan Carlos Castillo Castillo, Yibi De Jesús Reyes Rivera, Xóchitl Irela Zavala Bojórquez y Blanca Estela González por supuestas violaciones a la normativa electoral, consistentes en la presunta afiliación indebida, sin que hubiere mediado consentimiento alguno, atribuible al partido político Movimiento Ciudadano._____

1.9.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/MAJSM/CG/53/2018, iniciado con motivo de la denuncia presentada por Miguel Ángel de Jesús Soto Martínez, a través de la cual hizo del conocimiento de esta autoridad, hechos presuntamente contraventores de la normatividad electoral, derivada de la presunta indebida afiliación al partido político MORENA y uso, sin consentimiento, de sus datos personales._____

1.10.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente

UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018, iniciado con motivo de la denuncia presentada por Jorge Luis Trujillo Lorena, Juan Carlos Brito Noh, Celia Medina Moya, Cynthia Elena Almanza Vásquez, Jose Antonio Hernández García, Jose Eli Sánchez Silva, Jorge Octavio Solórzano Baylon, Milton Ernesto Cruz Carpio, León Felipe Arellano Luna, Rubén Juan de Dios Guerrero Chávez, María Guadalupe Cruz Martinez, Eusenia Crisostomo Ángeles, Gerardo Tinajero Romero y Esperanza Hernández Casillas, por supuestas violaciones a la normativa electoral, consistentes en la presunta afiliación indebida, sin que hubiere mediado consentimiento alguno, así como por Luis Miguel Tzakum Ek, quien alega haber solicitado su desafiliación sin que se hubiera llevado a cabo, todo ello atribuible al Partido Revolucionario Institucional._____

1.11.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/MPC/JD02/TLAX/73/2018, iniciado con motivo de la denuncia presentada por Mayte Pérez Cortés, por supuestas violaciones a la normativa electoral, consistentes en la probable violación a su derecho de libertad de afiliación y, en su caso, la utilización indebida de sus datos personales._____

1.12.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/CAE/JL/HGO/79/2018 que se deriva de la queja presentada por Celestino Ábrego Escalante, quien presentó escrito por el cual hizo del conocimiento de esta autoridad hechos presuntamente contraventores de la normatividad electoral en materia de transparencia, atribuibles al Partido de la Revolución Democrática._____

1.13.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/JIA/JD11/VER/83/2018, iniciado con motivo de la denuncia presentada por Jorge Iturbe Ávila en contra del Partido Nueva Alianza, por supuestas violaciones a la normativa electoral, consistentes en la indebida afiliación de dicho ciudadano, al citado instituto político y, en su caso, el uso no autorizado de sus datos personales._____

1.14.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/MAZM/JL/OAX/89/2018 que se deriva de la queja presentada por María de

los Ángeles Zavaleta Martínez, quien presentó escrito por el cual hizo del conocimiento de esta autoridad hechos presuntamente contraventores de la normatividad electoral, relacionados con la afiliación del Partido Verde Ecologista de México sin su consentimiento, para lo cual, en su caso, se utilizaron sus datos personales._____

1.15.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/NAJS/JD01/ZAC/92/2018, iniciado con motivo de las quejas presentadas por Norma Araceli Jiménez Sánchez y Julio Adrián Lara Estrada, por supuestas violaciones a la normativa electoral, atribuibles al Partido Revolucionario Institucional, consistentes en la presunta afiliación indebida de los mencionados ciudadanos al partido político en cita, sin que hubiere mediado consentimiento alguno._____

1.16.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/JAEL/CG/103/2018, iniciado con motivo de las quejas presentadas por Jane Arely Espinosa Lessciur, José de Jesús Franco López, Martha Araceli López Molina, Eleazar Zuñiga Mendoza, Ana Rebeca Figueroa Cruz, Christian Iván Olivares Avalos, María Nancy Rubín Domínguez, Mónica Isabel Montaña Sánchez, Juan Carlos Ayala Vega, Adán Felipe Felipe, Claudia Esmeralda Reyes Márquez, Olga Odilia Ríos Salazar, Erika Flores Linares y Nancy Alejandra Torres Gutiérrez, por supuestas violaciones a la normativa electoral, atribuibles al Partido Revolucionario Institucional, consistentes en la presunta afiliación indebida de los mencionados ciudadanos al partido político en cita, sin que hubiere mediado consentimiento alguno._____

1.17.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/VPC/CG/116/2018, iniciado con motivo de la denuncia presentada por diversas ciudadanas en contra del partido político Movimiento Ciudadano, por supuestas violaciones a la normativa electoral, consistentes en su indebida afiliación al citado instituto político y, en su caso, el uso no autorizado de sus datos personales._____

1.18.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/QLVRC/JD07/NL/122/2018, iniciado con motivo de la queja presentada por

diversos ciudadanos, en contra del Partido Verde Ecologista de México, por supuestas violaciones a la normativa electoral, consistentes en la indebida afiliación y, en su caso, el uso no autorizado de sus datos personales. _____

1.19.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/EZM/JD06/CHIS/142/2018, iniciado con motivo de las denuncias presentadas por tres personas, por supuestas violaciones a la normativa electoral, consistentes en su afiliación indebida al Partido Acción Nacional y, en su caso, el uso no autorizado de sus datos y documentos personales. _____

1.20.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018 que se deriva de quejas presentadas por diecinueve (19) ciudadanos, quienes presentaron escritos por los cuales, cada uno de ellos, hizo del conocimiento de esta autoridad hechos presuntamente contraventores de la normatividad electoral, relacionados con la afiliación del Partido Acción Nacional presuntamente sin su consentimiento, para lo cual, en su caso, se utilizaron sus datos personales. _____

1.21.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/DEVU/JD04/QRO/167/2018, iniciado con motivo de la denuncia presentada por Diego Eduardo Vázquez Urbano, a través de la cual hizo del conocimiento de esta autoridad, hechos presuntamente contraventores de la normatividad electoral, derivada de la presunta indebida afiliación a MORENA y uso, sin consentimiento, de sus datos personales. _____

1.22.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/MRS/JL/PUE/176/2018, iniciado con motivo de sendas denuncias en contra del Partido del Trabajo, por supuestas violaciones a la normativa electoral, consistentes en su afiliación indebida al citado instituto político y, en su caso, el uso no autorizado de sus datos y documentos personales. _____

1.23.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/JCAV/JD08/MICH/204/2018, iniciado con motivo de la denuncia presentada por Julio César Almanza Vega, en contra del Partido Verde Ecologista de México, por supuestas violaciones a la normativa electoral, consistentes en la probable violación a su derecho de libertad de afiliación y, en su caso, la utilización indebida de sus datos personales._____

1.24.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/JBBJ/JD03/GRO/205/2018, iniciado con motivo de la denuncia presentada por Juan Bernardo Balanzar Jacobo, en contra del Partido del Trabajo, por supuestas violaciones a la normativa electoral, consistentes en la probable violación a su derecho de libertad de afiliación de dicho ciudadano que aspiraba al cargo de Capacitador Asistente Electoral y, en su caso, la utilización indebida de sus datos personales._____

1.25.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/LGT/JD22/MEX/207/2018 integrado con motivo de la denuncia presentada por Liliana Gollas Trejo, por supuestas violaciones a la normatividad electoral, consistentes en su presunta violación al derecho de libre afiliación, en su modalidad de omisión de cancelar el registro de militancia atribuible al Partido Acción Nacional._____

1.26.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/LCPS/JL/NAY/219/2018 que se deriva del Cuaderno de Antecedentes aperturado con motivo del oficio signado por los Vocales Ejecutivo y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, ambos de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Nayarit, a través del cual hicieron del conocimiento de esta autoridad, hechos presuntamente contraventores de la normatividad electoral, relacionados con la aparición de ciudadanos que aspiraban al cargo de supervisor electoral y/o capacitador asistente electoral, y que se encontraron en el padrón de diversos partidos políticos nacionales, presuntamente sin su consentimiento._____

- 2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se determina la asignación de tiempos en Radio y Televisión a las Autoridades Electorales Locales para el cuarto trimestre de dos mil dieciocho, correspondiente al periodo ordinario federal, mediante la aplicación de criterios específicos de distribución._____
- 3.- Presentación de los Informes Anuales y de Gestión que las Comisiones rinden al Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre el desarrollo de sus actividades durante el año 2018._____
- 3.1.- Comisión Capacitación y Organización Electoral_____
- 3.2.- Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero_____
- 3.3.- Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos_____
- 3.4.- Comité de Radio y Televisión_____
- 3.5.- Comisión de Quejas y Denuncias_____
- 3.6.- Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales_____
- 3.7.- Comisión del Registro Federal de Electores_____
- 3.8.- Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional_____
- 3.9.- Comisión de Fiscalización_____
- 4.- Informe Final de Actividades del Plan Integral de Trabajo del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales 2017-2018. (Comisión de Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero)_____
- 5.- Informe Final sobre el seguimiento al procedimiento de acreditación de las y los observadores electorales, en el Proceso Electoral 2017-2018. (Comisión Capacitación y Organización Electoral)_____
- 6.- Informe Final del seguimiento al Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2017-2018. (Junta General Ejecutiva)_____
- 7.- Informe parcial que presenta la Coordinación de Asuntos Internacionales sobre el Proyecto de Apoyo para la Observación Electoral 2018._____
- 8.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el cual se emiten reglas generales aplicables al procedimiento de liquidación de los Partidos Políticos

Nacionales que no obtuvieron el porcentaje mínimo de la votación establecido en la ley para conservar su registro. (Comisión de Fiscalización)_____

9.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyectos de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a sentencias dictadas por la Sala Superior y Salas Regionales Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Toluca y Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de Fiscalización._____

9.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral en cumplimiento al SM-RAP-80/2018 dictado por la Sala Regional de la Segunda Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Monterrey se emite respecto al Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización, presentado por el C. José Juan Hernández Hernández, Representante del Partido Revolucionario Institucional, en contra del Partido Acción Nacional y su entonces candidato a Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, identificada como INE/Q-COF-UTF/664/2018/NL._____

9.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SCM-RAP-53/2018, promovido por el C. Christian Damián Roehrich de la Isla, otrora candidato a diputado local por el distrito 17 de la Ciudad de México._____

9.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SCM-RAP-59/2018, interpuesto por el C. Julio César Moreno Rivera, en contra de la resolución INE/CG849/2018, respecto de la queja en materia de fiscalización identificada con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/644/2018/CDMX._____

9.4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SCM-RAP-62/2018._____

9.5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída a los recursos de apelación identificados con los números de expediente SCM-RAP-63/2018 y su acumulado SCM-RAP-70/2018._____

9.6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SCM-RAP-65/2018._____

9.7.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SCM-RAP-75/2018 y acumulado SCM-RAP-96/2018._____

9.8.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SCM-RAP-77/2018, interpuesto por Movimiento Ciudadano, en contra del dictamen consolidado identificado con clave número INE/CG1165/2018, relativo a la revisión de los informes de ingresos y gastos de las y los candidatos a la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos correspondientes al Proceso Electoral Federal-Local Ordinario 2017-2018 en Puebla.____

9.9.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SCM-RAP-83/2018, interpuesto por Movimiento Ciudadano, en contra del dictamen consolidado identificado con clave

número INE/CG1165/2018, relativo a la revisión de los informes de ingresos y gastos de las y los candidatos a la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos correspondientes al Proceso Electoral Federal-Local Ordinario 2017-2018 en Puebla._

9.10.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SCM-RAP-78/2018._____

9.11.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SX-RAP-64/2018, interpuesto por Movimiento Ciudadano, en contra del dictamen consolidado INE/CG1105/2018 y la resolución INE/CG1107/2018._____

9.12.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SX-RAP-66/2018, interpuesto por el Partido del Trabajo, en contra del dictamen consolidado INE/CG1105/2018 y la resolución INE/CG1107/2018._____

9.13.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SG-RAP-209/2018 y acumulados._____

9.14.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SG-RAP-228/2018 y acumulados._____

9.15.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SX-RAP-74/2018._____

9.16.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SG-RAP-227/2018._____

9.17.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-336/2018._____

9.18.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-196/2017 y acumulado._____

9.19.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal Electoral, recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente ST-RAP-27/2017, interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra del Dictamen Consolidado y de la Resolución identificados con los números INE/CG515/2017 e INE/CG516/2017 respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido Acción Nacional, correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis._____

9.20.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación número SX-RAP-26/2018._____

9.21.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da

cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en Monterrey, recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SM-RAP-52/2018.

9.22.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-77/2018.

9.23.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el número SUP-RAP-279/2018.

9.24.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SX-RAP-78/2018.

9.25.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Ciudad de Mexico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SCM-RAP-82/2018, interpuesto por Movimiento Ciudadano, en contra del Dictamen Consolidado identificado con clave número INE/CG1165/2018, relativo a la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de las y los candidatos a la Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos correspondientes al Proceso Electoral Federal-Local Ordinario 2017-2018 en Puebla.

9.26.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de México, recaída al recurso de apelación identificado con el número SCM-RAP-97/2018._____

9.27.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SCM-RAP-108/2018._____

9.28.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SCM-RAP-124/2018, interpuesto por Pacto Social de Integración, en contra del Dictamen Consolidado identificado con clave número INE/CG1165/2018, relativo a la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de las y los candidatos a la Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos correspondientes al Proceso Electoral Federal-Local Ordinario 2017-2018 en Puebla._____

9.29.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de México, recaída al recurso de apelación identificado con el número SCM-RAP-106/2018._____

9.30.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el número SUP-RAP-275/2018._____

9.31.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz, recaída al recurso de apelación identificado con el número SX-RAP-76/2018._____

9.32.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de México, recaída al recurso de apelación identificado con el número SCM-RAP-76/2018._____

9.33.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de México, recaída al recurso de apelación identificado con el número SCM-RAP-99/2018._____

9.34.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz, recaída al recurso de apelación identificado con el número SX-RAP-57/2018._____

9.35.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de México, recaída al recurso de apelación identificado con el número SG-RAP-257-2018, relacionado con el expediente INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL._____

9.36.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal

Electoral con sede en Toluca, recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente ST-RAP-59/2018._____

9.37.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey, relacionado con el número SM-RAP-75/2017._____

9.38.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de México, recaída al recurso de apelación identificado con el número SCM-RAP-87/2018._____

10.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto al procedimiento oficioso y administrativo sancionador en materia de fiscalización instaurados en contra de Partidos Políticos Nacionales. (Comisión de Fiscalización)____

10.1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, instaurado en contra del Partido Revolucionario Institucional, identificado con el número de expediente P-UFRPP 56/13._____

10.2.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra de los Partidos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo, identificado con el número de expediente P-UFRPP 60/13._____

11.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello) Proyecto de Dictamen del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativo a la pérdida de registro del Partido Político Nacional denominado Nueva Alianza, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la Elección

Federal Ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho. (Junta General Ejecutiva)_____

12.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello) Proyecto de Dictamen del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativo a la pérdida de registro del Partido Político Nacional denominado Encuentro Social, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la Elección Federal Ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho. (Junta General Ejecutiva)_____

13.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez) Informe Final de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales sobre el cumplimiento y avance de las actividades establecidas en el Plan Integral y los Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2017-2018._____

14.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la modificación del Acuerdo INE/CG652/2018, en acatamiento a las sentencias emitidas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y SUP-JDC-421/2018, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales)_____

15.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello) Informe Final del Marco de Actuación para la Continuidad de Operaciones del Proceso Electoral Federal 2018. (Secretaría Ejecutiva)_____

16.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello) Cuarto Informe que presenta el Secretario Ejecutivo al Consejo General del Instituto Nacional Electoral con el propósito de difundir, en atención al principio de definitividad que rige los procesos electorales, la realización y conclusión de las etapas, actos y actividades trascendentes de los órganos electorales del Instituto._____

17.- (A petición del Consejera Electoral, Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas) Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se designa como ganadora en el cargo de Vocal Ejecutivo Distrital a la persona aspirante que forma parte de la Lista de Reserva de la primera Convocatoria del Concurso Público 2016-2017. (Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional)_____

18.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica la integración de diversas Comisiones Permanentes, se ratifica la rotación de las Presidencias de las Comisiones Permanentes y otros órganos, así como se crean las Comisiones Temporales de seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019 y, de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de las modalidades de su voto._____

19.- (A petición de los Consejeros Electorales, Dr. Ciro Murayama Rendón y Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Protocolo para la implementación de buenas prácticas en el ejercicio de los recursos del gasto programado: capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. (Comisión de Fiscalización) (Comisión Temporal para el fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación)_____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo._____

Dé cuenta del primer punto del orden del día._____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, es el relativo a los Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto a diversas quejas por hechos que se considera constituyen infracciones a la Ley en la Materia, mismo que se compone de 26 apartados._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores Consejeros y representantes, consulto a ustedes si desean reservar para su discusión algún apartado del presente punto del orden del día o bien, si es el deseo de alguno de los miembros del Consejo General, solicitar la apertura en una ronda de discusión en lo general._____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín._____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente._____

Buenas tardes a todas y a todos._____

Quisiera pedir una ronda en lo general, por favor._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: ¿Alguien desea reservar algún asunto en particular?_____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña._____

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente._____

Buenas tardes a todas y todos. _____

Tengo algunos apartados para reservar que son los mismos temas de siempre, entiendo que por votación sí se tendrían que decir cuáles y si se pudieran agrupar se intentaría, pero no lo sé._____

Serían los apartados 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 1.15, 1.16, 1,18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23 y el 1.25._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero, Electoral Roberto Ruíz Saldaña._____

Tiene la palabra la Consejera Electoral Adriana Favela._____

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente._____

Quiero proponer que se retire el apartado 1.1 para mayor análisis del asunto por su relevancia, por favor._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Entonces se reservaría para una votación en lo particular planteando el retiro en su momento._____

Tiene la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín._____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente._____

De hecho la razón por la que pedí la ronda en lo general, creo que va a atender algunas de las preocupaciones del Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña, porque pediré como lo hemos hecho en otras ocasiones que se agrupen algunos apartados, ya lo expondré en la ronda en lo general pero lo específico solo reservar los apartados 1.2, 1.22 y 1.23, en relación con lo demás los señalaré en la ronda en lo general._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín._____

Al no haber más reservas._____

Procedamos, con la ronda en lo general. _____
Secretario del Consejo, consulte en votación económica la realización, de una ronda de discusión en lo general. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales en votación económica se consulta si se aprueba abrir una ronda de discusión para exponer los planteamientos en lo general. _____

Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. _____

Aprobada por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. _____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente. _____

La razón como lo había adelantado para pedir la ronda en lo general, es porque hay un conjunto en lo general de Procedimientos Sancionadores, excepto uno que ha pedido la Consejera Electoral Adriana Favela que se retire, que acompañaría esa propuesta para traerlo posteriormente y uno adicional que tiene que ver con un asunto de transparencia, en general todos los demás tienen que ver con asuntos de afiliaciones indebidas, cuestión que hemos conocido en distintas ocasiones en este Consejo General y que ya hay posturas diferenciadas muy claras entre los integrantes del Consejo General, precisamente por eso, pediría que más que reservarse y le preguntaría al Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña si esto atiende sus motivos de reserva de un porcentaje alto de los asuntos que él señaló, si pudiéramos someterlos a votación en lo general y en lo particular. _____

Primero, le he pasado la lista al Secretario del Consejo, pero para dar claridad al asunto, voy a quitar el 1.1 para facilitar, en los apartados 3, 4, 5, 15 y 16, pediría que se someta a votación en lo particular lo que tiene que ver con la reiteración, cuestión que hemos tenido en distintos casos, me parece estamos ante conductas reiteradas, y así no se señala en el Proyecto de Resolución. _____

Por lo que hace a los apartados 1.6, 1.7, 1.10, 1.19 y 1.20, pediría 2 votaciones en lo particular, una tiene que ver con la reiteración, y otra con un asunto que varios colegas hemos señalado, que tiene que ver con la diferencia entre las sanciones que se están imponiendo por la afiliación en la vertiente positiva y en la vertiente negativa. _____

Entonces, separar también la sanción disminuida que se está planteando en estos casos. _____

En el 1.8 y en el 9.9, pedir una votación en lo particular, por lo que hace a los casos de desistimientos, que tal como también nos planteaban en distintas ocasiones, no acompaño que en casos de afiliación indebidas se tomen por buenos los desistimientos. _____

En el caso del apartado 1.18, pediría una votación en lo particular por un supuesto muy concreto en el que nos señalan que hay una falsificación de una firma para la afiliación, y como lo he señalado, considero que este asunto se debería de escindir para investigarse más. _____

Y en el apartado 1.25, solo atender lo relativo a una votación en lo particular por la sanción disminuida. _____

Adicional a esto hay 4 asuntos en los que pediría que esto se incluya en la votación en lo general, porque esto no es un tema que tendría diferencias. Son en el Punto Resolutivo donde se ordena que se den de baja a aquellas personas que fueron afiliadas indebidamente. _____

Solo en estos casos no señala la fecha a partir de la cual surte efectos la cancelación de la afiliación, es una precisión que viene en todos los demás proyectos, entonces creo que eso se puede incorporar en lo general y ya están señalados para que al momento de la votación se pueda incorporar dentro de la votación en lo general. _____

Y ya solo entraría la discusión de los asuntos que había señalado que reservaría. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. _____

Si no hay más intervenciones, le voy a pedir al Secretario del Consejo, que tome la votación de aquellos asuntos que no fueron reservados para su discusión o en todo caso, una votación en lo particular, atendiendo si no hay inconveniente de parte del Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña, la propuesta que ha hecho en la intervención en lo general la Consejera Electoral Pamela San Martín. _____

Por favor, Secretario proceda. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Sí, lo que sucede es que en algunos casos no son estrictamente coincidente los planteamientos de la Consejera Electoral Pamela San Martín con los del Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín para una moción. _____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Solo como moción, entiendo que el único que no estaría en esta misma línea sería el apartado 1.21 que él ha pedido que se reserve y los demás entiendo que las razones de la reserva son las que he señalado, y se atendería con la votación diferenciada es lo que he entendido. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la palabra para una moción el Consejero Electoral José Roberto Ruiz. _____

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Sí, en efecto la propuesta de agrupamiento no perjudica en nada las reservas que yo hice, de todos modos, le consulto a la Consejera Electoral Pamela San Martín, si el apartado 1.25 lo menciono. _____

Muy bien, no hay problema. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Si entiendo bien, podríamos, salvo el apartado 1.1 que tiene que ver con la propuesta de la Consejera Electoral Adriana Favela de su retiro para una discusión en una sesión posterior del Consejo General. _____

El apartado 1.2, que fue reservado por el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, pero también por la Consejera Electoral Pamela San Martín para una discusión en lo particular._____

El 1.21 que ameritaría algún tipo de reflexión por parte del Consejero José Roberto Ruíz Saldaña._____

Los apartados 1.22 y 1.23, que también se discutirían en lo particular y que han sido reservados por ambos Consejeros Electorales, todos los demás podrían votarse en esta votación, algunos sin más planteamientos, otros en lo general con una votación en lo particular._____

¿Estoy en lo correcto?_____

Secretario del Consejo, proceda en ese sentido entonces._____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con mucho gusto Consejero Presidente, de manera tal que les propondría a ustedes las siguientes votaciones._____

Por lo que hace a los apartados 1.11, 1.12, 1.13, 1.14,1.17, 1.24 y 1.26 estos podrían votarse en lo general y nadie los reservó._____

Y por lo que hace a los apartados 1.3, 1.4, 1.5, 1.15 y 1.16, estos 2 tendrían, además la propuesta que creo que podría ir en lo general, que son los efectos de la baja, pero de todos modos los 5 tendrían que ir en lo particular porque hay criterios distintos de reiteración._____

Por lo que hace a los apartados 1.6, 1.7, 1.10, 1.19 y 1.20 por lo que hace a la reiteración y la sanción disminuida tendría que ir una votación en lo particular, y por lo que hace a los apartados 1.8 y 1.9 también tendría que haber una votación en lo particular._____

Por los desistimientos, exactamente._____

Y votación en lo particular por la firma falsificada en el caso de los apartados 1.18 y el 1.25 por sanción disminuida._____

Entonces, en ese sentido haría las propuestas de votación tanto en lo general como en lo particular. Sí._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la palabra para una moción, la Consejera Electoral Claudia Zavala._____

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. _____

Buenos días a todas a todos._____

El apartado 1.25 creo que podría entrar en el bloque de los apartados 1.6, 1.7, 1.10, 1.19 y 1.20 para que fuera la votación dividida._____

Bueno, entonces aparte, gracias._____

Pero, sí pediría entonces porque esa sí es una sanción diferenciada, criterio en el que yo no he acompañado._____

Que lo votemos, ese tema en específico, por separado._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Específico se votaría en lo particular por lo que tiene que ver a la sanción._____

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Así es._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Continúe, Secretario del Consejo._____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban los Proyectos de Resolución de Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificados en el orden del día como los apartados 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.17, 1.24 y 1.26._____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo._____

Aprobados por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello).__

Ahora votaciones en lo particular._____

(Texto de las Resoluciones aprobadas INE/CG1233/2018, INE/CG1234/2018, INE/CG1235/2018, INE/CG1236/2018, INE/CG1237/2018 INE/CG1238/2018 e INE/CG1239/2018) Ptos. 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.17, 1.24 y 1.26_____

INE/CG1233/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ORDINARIO
EXPEDIENTE:
UT/SCG/Q/MPC/JD02/TLAX/73/2018
DENUNCIANTE: MAYTE PÉREZ CORTÉS
DENUNCIADO: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/MPC/JD02/TLAX/73/2018, INICIADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR MAYTE PÉREZ CORTÉS, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA PROBABLE VIOLACIÓN A SU DERECHO DE LIBERTAD DE AFILIACIÓN Y, EN SU CASO, LA UTILIZACIÓN INDEBIDA DE SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 12 de septiembre de dos mil dieciocho.

GLOSARIO	
<i>Consejo General</i>	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
<i>Constitución</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<i>Comisión de Quejas</i>	Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>DEPPP</i>	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
<i>DERFE</i>	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral

GLOSARIO	
<i>UTCE</i>	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
<i>INE/Instituto</i>	Instituto Nacional Electoral
<i>LGIPE</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>LGPP</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>COFIPE</i>	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>LGTAIP</i>	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
<i>LFTAIP</i>	Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
<i>LGSMIME</i>	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
<i>PAN</i>	Partido Acción Nacional
<i>Reglamento de Quejas</i>	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>Sala Superior</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>Tribunal Electoral</i>	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

A N T E C E D E N T E S

I. DENUNCIA¹. El dos de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en la UTCE, escrito de queja signado por Mayte Pérez Cortés, quien, en esencia, denuncia la posible violación a su derecho de libertad de afiliación atribuida al PAN y, en su caso, el uso indebido de sus datos personales para tal fin.

II. REGISTRO, ADMISIÓN, RESERVA DE EMPLAZAMIENTO Y DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.² Mediante acuerdo de tres de abril del año en curso, la UTCE

¹ Visible a fojas 1 a 6 del expediente.

² Visible a fojas 7 a 14 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPC/JD02/TLAX/73/2018

determinó integrar el expediente en que se actúa, el cual quedó registrado con la clave UT/SCG/Q/MPC/JD02/TLAX/73/2018.

En dicho acuerdo, se admitió a trámite el procedimiento ordinario sancionador respecto de Mayte Pérez Cortés y se determinó reservar el emplazamiento de las partes hasta en tanto culminara la etapa de investigación.

En ese sentido, con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, se ordenó la realización de los siguientes requerimientos:

Sujeto requerido	Oficio	Fecha de Respuesta
<i>PAN</i>	INE-UT/4019/2018 03-04-2018 ³	06/04/2018 ⁴
<i>DEPPP</i>	INE-UT/4020/2018 04-04-2018 ⁵	09/04/2018 Correo institucional ⁶

III. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Mediante proveídos de dieciocho⁷ de abril y dieciséis de mayo del año en curso⁸, se ordenó la realización de las siguientes diligencias, a fin de integrar correctamente el expediente al rubro indicado:

18 de abril de 2018		
Sujeto requerido	Oficio	Fecha de Respuesta
<i>PAN</i>	INE-UT/4669/2018 19-04-2018 ⁹	24/04/2018 ¹⁰

³ Visible a foja 20 del expediente.

⁴ Visible a fojas 26 a 28 y su anexo visible a fojas 29 a 47 del expediente.

⁵ Visible a foja 21 del expediente.

⁶ Visible a fojas 48 a 49 del expediente.

⁷ Visible a fojas 57 a 59 del expediente.

⁸ Visible a fojas 69 a 71 del expediente.

⁹ Visible a foja 62 del expediente.

¹⁰ Visible a fojas 67 y 68 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPC/JD02/TLAX/73/2018

16 de mayo de 2018		
Sujeto requerido	Oficio	Fecha de Respuesta
PAN	INE-UT/7287/2018 18-05-2018 ¹¹	22/05/2018 ¹²

III. EMPLAZAMIENTO. Mediante proveído de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho,¹³ la *UTCE* ordenó emplazar al *PAN*, para que manifestara lo que a su derecho conviene respecto del presente asunto, proveído que fue notificado conforme a lo siguiente:

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
PAN INE-UT/8198/2018 ¹⁴ 29/05/2018	Citatorio: ¹⁵ 30 de mayo de 2018. Cédula: ¹⁶ 31 de mayo de 2018. Plazo: 01 al 07 de junio de 2018.	06/junio/2018 ¹⁷

IV. VISTA PARA ALEGATOS.¹⁸ Por acuerdo de veinte de junio de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a las partes para que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera; vista que fue desahogada conforme al cuadro siguiente:

Denunciado

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
PAN INE-UT/9946/2018 22-06-2018 ¹⁹	Citatorio: 21 de junio de 2018 ²⁰ . Cédula: 22 de junio de 2018 ²¹ . Plazo: 25 al 29 de junio de 2018.	Sin respuesta

¹¹ Visible a foja 74 del expediente.

¹² Visible a fojas 78 a 79 y su anexo visible a fojas 80 a 82 del expediente.

¹³ Visible a fojas 84 a 89 del expediente.

¹⁴ Visible a foja 95 del expediente.

¹⁵ Visible a fojas 99 a 105 del expediente.

¹⁶ Visible a foja 96 a 98 del expediente.

¹⁷ Visible a fojas 108 a 110 del expediente.

¹⁸ Visible a fojas 111 a 114 del expediente.

¹⁹ Visible a fojas 119 del expediente.

²⁰ Visible a fojas 122 a 127 del expediente.

²¹ Visible a fojas 120 a 121 del expediente.

Denunciantes

No	Quejosos – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
1	Mayte Pérez Cortés INE/JD-02/TX/0457/2018 ²²	Cédula: 22 de junio de 2018 ²³ Plazo: 25 al 29 de junio de 2018.	Sin respuesta

V. ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se ordenó elaborar el Proyecto de Resolución correspondiente para someterlo a la consideración de la Comisión de Quejas.

VI. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. En la Octogésima Cuarta Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el seis de septiembre de este año, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral aprobó el proyecto por unanimidad de votos de sus integrantes, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA.

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión de Quejas, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), t) y u); 44, párrafo 2; 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b), y 25,

²² Visible a foja 133 del expediente.

²³ Visible a fojas 134 y 135 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPC/JD02/TLAX/73/2018

párrafo 1, incisos a), e), t) y u) de la *LGPP*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte del *PAN* en perjuicio de Mayte Pérez Cortés.

Ahora bien, conforme al artículo 23 del *COFIPE*, los partidos políticos ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en el citado Código, correspondiendo al Instituto Federal Electoral —hoy *INE*— vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n); y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho Código, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38 del dispositivo legal en cita, las cuales son sancionables por el *Consejo General*.

Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443 párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la *LGIPE* y 25 de la *LGPP*, respectivamente.

En consecuencia, siendo atribución del *Consejo General* conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta competente para conocer y resolver respecto de las presuntas infracciones denunciadas en el presente procedimiento sancionador ordinario, atribuidas al *PAN*, derivado, esencialmente, de la violación al derecho de libertad de afiliación y utilización indebida de datos personales de Mayte Pérez Cortés.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,²⁴ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta violación al derecho de libertad de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

²⁴ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de ciudadanos.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, incisos a) y n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIPE*—los cuales contienen reglas que ya se encontraban previstas en el COFIPE, en los artículos 342, párrafo 1, incisos a) y n) ; 356, 361, 364, 365 y 366—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO.

En el presente asunto se debe subrayar que la presunta violación al derecho de libertad de afiliación se cometió durante la vigencia del COFIPE, puesto que el registro o afiliación de la quejosa al *PAN* se realizó el dieciséis de abril de dos mil catorce, fecha en la cual se encontraba vigente dicho código.

Por tanto, si al momento de la comisión de las presuntas faltas se encontraba vigente el COFIPE,²⁵ es claro que este ordenamiento legal debe aplicarse para las cuestiones sustantivas del procedimiento que nos ocupa, al margen que las faltas pudiera haber sido advertida por la quejosa y cuestionada mediante la queja que

²⁵ El COFIPE estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce.

dio origen al presente asunto, una vez que dicha norma fue abrogada por la LGIPE, así como que este último ordenamiento sea fundamento para cuestiones procesales o adjetivas.

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO

1. FIJACIÓN DE LA LITIS

La controversia en el procedimiento, se constriñe a determinar si el Partido denunciado violó el derecho de libertad de afiliación de Mayte Pérez Cortés, haciendo para ello uso ilegítimo de su información personal, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), t) y u); 44, párrafo 2; 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e), t) y u) de la *LGPP*.

2. MARCO NORMATIVO.

A) Constitución, tratados internacionales y ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

...

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues

sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos y agrupaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPC/JD02/TLAX/73/2018

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 24/2002 emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES**.²⁶

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,²⁷ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

²⁶ Consultable en la página: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

²⁷ Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes —asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la

legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

“Artículo 23. Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:

I...

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.”

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados

que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que, en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;
- Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
- Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política,

e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGPE*, que es obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* del *IFE* por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *H. Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su constitución y registro.

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPC/JD02/TLAX/73/2018

- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.
- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que, en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él,

determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna del Partido Acción Nacional.

Derivado de lo anterior, particularmente de que la infracción presuntamente cometida por el PAN, consiste precisamente en el incumplimiento de sus propias normas de afiliación, se hace necesario analizar éstas, a fin de conocer las condiciones en que fue incorporada la ciudadana a su padrón de afiliados.

Estatuto del PAN²⁸

Artículo 8

1. Son militantes del Partido Acción Nacional, los ciudadanos mexicanos que de forma individual, libre, pacífica, voluntaria, directa y presencial, manifiesten su deseo de afiliarse, asuman como propios los principios, fines, objetivos y documentos básicos del Partido Acción Nacional, y sean aceptados con tal carácter.

2. Para el caso de los mexicanos residentes en el extranjero, quedarán exentos del requisito de realizar su procedimiento de afiliación en forma presencial.

Artículo 9

1. El procedimiento de afiliación se regirá conforme a lo previsto en el Reglamento correspondiente. La solicitud se presentará por escrito y podrá realizarse ante cualquier Comité del Partido de la entidad federativa correspondiente, independientemente donde se encuentre su domicilio. Los mexicanos residentes en el extranjero, se podrán afiliar fuera del territorio nacional.

²⁸ Los cuales se encontraban vigentes al momento de la afiliación de la denunciante. Mismos que fueron aprobados el 23/10/2013, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y pueden ser consultados en <http://actores-politicos.ine.mx/docs/actores-politicos/partidos-politicos/nacionales/documentos-basicos/historico-documentos/PAN23102013EST.pdf>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPC/JD02/TLAX/73/2018

2. En los casos en que se niegue el registro en la entidad, podrán realizar el procedimiento de afiliación, en el Registro Nacional de Militantes.

Artículo 10

1. Para ser militante, se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Ser ciudadano mexicano.
- b) Tener un modo honesto de vivir.
- c) Haber participado en la capacitación coordinada o avalada por el área correspondiente del Comité Ejecutivo Nacional.
- d) Suscribir el formato aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional, acompañando copia de su credencial para votar con fotografía vigente, emitida por el Instituto Federal Electoral; en el caso de mexicanos que residan en el extranjero, podrán acompañar copia de la matrícula consular. En el formato se expresa la obligación de cumplir y respetar los principios de doctrina y documentos básicos de Acción Nacional y su compromiso de participar en forma activa y permanente en la realización de los fines, objetivos y actividades del Partido.
- e) No estar afiliado a otro partido político ya sea nacional o local.

2. En caso de haber sido militante de otro partido político, deberá separarse de manera definitiva de dicho instituto político, por lo menos seis meses antes de solicitar su afiliación como militante.

3. La militancia en el Partido inicia a partir de la aceptación por el Registro Nacional de Militantes, quien verificará el cumplimiento de los requisitos antes mencionados. En caso de ser aceptado, la fecha de inicio de la militancia será a partir de la recepción de la solicitud de afiliación.

4. El militante se dará como aceptado, si en el plazo de sesenta días naturales, contados a partir de la entrega de la solicitud, no se emite pronunciamiento alguno por parte del Registro Nacional de Militantes.

D) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

Lo anterior, se robustece con el criterio sostenido por la Sala Superior, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-141/2018, en el que determinó, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“...los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de un ciudadano pertenecer a un partido político, no puede alegar que existe uso indebido de sus datos personales porque se consideran públicos.”

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPC/JD02/TLAX/73/2018

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban pertenecer,...

Así, de lo transcrito, se obtiene medularmente lo siguiente:

- El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, fundamentalmente, en la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para decidir libre e individualmente si desean formar parte de los partidos y agrupaciones políticas.
- Afiliado o Militante es el ciudadano que libre, voluntaria e individualmente, acude a un partido político para solicitar su incorporación al padrón de militantes respectivo, a través de los documentos aprobados por los órganos partidistas correspondientes.
- Podrán ser militantes del PAN, los ciudadanos mexicanos que de forma individual, libre pacífica, voluntaria, directa y presencial, manifiesten su deseo de afiliarse, asuman como propios los principios, fines, objetivos y documentos básicos del PAN y sean aceptados con tal carácter.
- Para obtener la militancia al PAN, se requiere, además de ser ciudadano mexicano, suscribir el formato aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional, acompañado de copia de su credencial para votar con fotografía vigente.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.

- Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán contemplar en sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos.

3. CARGA Y ESTANDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO.

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante del *PAN*, por regla general debe suscribir el documento formal de afiliación.

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso el PAN), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del *COFIPE*, precepto que, derivado de la reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la *LGPP*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacios para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los

elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que además los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos les corresponde demostrar que las personas que lo integran fue derivado de una decisión individual, libre y voluntaria.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar

el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la *Sala Superior*, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**,²⁹ donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia 21/2013, de rubro **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,³⁰ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria³¹ y como estándar probatorio.³²

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación³³ ha estimado que es posible derrotar la presunción de

²⁹ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

³⁰ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.

³¹ Tesis de Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

³² Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. Véase la nota 35.

³³ Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA**, **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA**

inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la *Sala Superior* consideró en la sentencia referida, que, para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con fundamento en el diverso 441 de la *LG/PE*, lo que implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento ordinario sancionador una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino que conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento

que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberadamente la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

4. HECHOS ACREDITADOS

Como se ha mencionado, la denuncia presentada por Mayte Pérez Cortés, versa sobre la supuesta violación a su derecho de libertad de afiliación, al haber sido incorporada al *PAN*, sin su consentimiento, así como la utilización de sus datos personales por parte de dicho partido político para sustentar la indebida afiliación.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPC/JD02/TLAX/73/2018

Ciudadana	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del PAN
Mayte Pérez Cortés	21 de febrero de 2018 ³⁴	Afiliada ³⁵ 16 de abril de 2014 en Tlaxcala	<p>Oficio RPAN-157/2018 06-04-2018³⁶</p> <p>Signado por el Representante Propietario del PAN ante el Consejo General, por el que informó que Mayte Pérez Cortés anteriormente sí fue su afiliada, pero que causó baja el 15 de noviembre de 2017, en virtud de la aplicación del Programa Específico de revisión, verificación, actualización, depuración y registro de huellas digitales implementado por el Registro Nacional de Militantes en la Comisión Especial Estratégica para la Transparencia y Reingeniería del Padrón de Militantes del PAN.</p> <p>Programa que consistió en que los militantes debían expresar por escrito, con firma y huella su voluntad de estar afiliados al PAN, situación que no ocurrió con Mayte Pérez Cortés, por lo que al no acudir a actualizar sus datos, se procedió a dar la de baja por la causal de depuración, en términos de lo establecido en los artículos 72, fracción VII y 79 del Reglamento de Militantes, ambos del Partido Acción Nacional, así como en el Acuerdo CEN/SG/14/2017</p> <p>Oficio RPAN2-0198/2018 24-04-2018³⁷</p> <p>Signado por el Representante Propietario del PAN ante el Consejo General por el que informa que respecto a las constancias de afiliación correspondientes (inicio de militancia), informó que en sesión ordinaria</p>

³⁴ Visible a foja 2 del expediente.

³⁵ Visible a foja 49 del expediente.

³⁶ Visible a fojas 26 a 28 del expediente.

³⁷ Visible a fojas 67 a 68 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPC/JD02/TLAX/73/2018

Ciudadana	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del PAN
			de fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, la Comisión de Afiliación del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional emitió un acuerdo por el que se autorizó la destrucción del papel que constituye el archivo muerto del área a su cargo existente hasta el 31 de diciembre de 2016, (entrada en vigor de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados), por lo que se encuentran imposibilitados de remitir la constancia de afiliación solicitada.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la denunciante fue incluida en el padrón de militantes del PAN; que dicha ciudadana negó haberse afiliado a ese partido político y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que dicha afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida cometida en agravio de Mayte Pérez Cortés y que para su comisión, se hizo un uso no autorizado de sus datos personales.</p>			

Las constancias aportadas por la *DEPPP*, al ser documentos generados en ejercicio de sus atribuciones, se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del Reglamento de Quejas, mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la *LGIPE* y 27, párrafo 2 del citado Reglamento, tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran controvertidas ni desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

Por otra parte, las documentales aportada por el partido denunciado y por la quejosa constituyen documentales privada cuyo valor probatorio es indiciario, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 461, párrafo 3, inciso b) y 462, párrafo 3, de la *LGIPE*; 22, párrafo 1, fracción II y 27, párrafo 3, del Reglamento de Quejas.

5. CASO CONCRETO.

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por la quejosa, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5 del COFIPE, cuyo contenido se replica en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, es posible advertir los elementos

que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, lo que significa que una situación antijurídica electoral, debe estar objetivamente demostrada por medio de pruebas.

Posteriormente, es menester verificar que tal situación sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico, —partido político, candidato o inclusive cualquier persona física o moral— es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales; por una parte, el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputabilidad o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, estará en aptitud de imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

En tal sentido, por cuanto hace a la existencia del supuesto normativo, debe reiterarse, como se estableció en apartados previos, que desde hace décadas está reconocido en la legislación de este país, la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, y de igual manera, que las personas en este país tienen el derecho de que se proteja su información privada y sus datos personales, todo lo cual está previsto desde el nivel constitucional.

En el caso, si bien en el marco normativo se hace referencia a los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, identificados con el número de resolución CG617/2012 y, de igual manera se transcribe la parte de disposiciones estatutarias del partido político denunciado, relacionada con el procedimiento de afiliación, lo

cierto es que, por el carácter constitucional de tales derechos, la existencia de los mismos —y las obligaciones correlativas a éstos—, no está condicionada al reconocimiento por parte de los sujetos obligados, en este caso, de los partidos políticos.

En otras palabras, si la libre afiliación a los institutos políticos es un derecho de los ciudadanos de este país desde hace varios decenios, resulta por demás evidente que las obligaciones de los partidos políticos que deriven de esta garantía -respetar la libertad de afiliación y, de ser necesario, acreditar que la incorporación a cada instituto político- no debe estar sujeta o condicionada a que éstos establezcan en sus normas internas disposiciones encaminadas a su protección, es decir, no depende, del momento en el que los partidos políticos hayan incluido en sus normas internas la obligación de que la afiliación sea voluntaria.

Por cuanto hace al elemento subjetivo señalado líneas arriba, debe destacarse que, la autoridad, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

Como se precisó con anterioridad, en principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento que formula en contra de la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde al quejoso.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley de Medios, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 340 del COFIPE, mismo que se reproduce con el diverso 441 de la LGIPE.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPC/JD02/TLAX/73/2018

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que contaba con el consentimiento de los quejosos para afiliarlos a su partido político, y no a los ciudadanos que negaron haber solicitado su inclusión en el padrón de militantes del partido político denunciado.

Por lo que, en el caso concreto, la carga de la prueba corresponde al PAN, en tanto que el dicho de la actora consiste en demostrar que no dio su consentimiento para ser militante, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba.

Ahora bien, de lo precisado en el apartado ACREDITACIÓN DE HECHOS, está demostrado a partir de la información proporcionada tanto por *el PAN*, como por la DEPPP, que la ciudadana denunciante fue incorporada al padrón de militantes del PAN el dieciséis de abril de dos mil catorce.

Lo anterior pone de manifiesto el hecho de que Mayte Pérez Cortés si fue afiliada al referido instituto político, por tanto, se trata de un hecho no controvertido y por tanto, no sujeto a prueba en términos de lo previsto en el artículo 358 del COFIPE, mismo que se replica en el 461 de la LGIPE.

Ahora bien, como quedó precisado con anterioridad la carga de la prueba corresponde al PAN y por ende es quien tuvo que aportar las pruebas suficientes para demostrar que Mayte Pérez Cortés fue afiliada voluntariamente al PAN.

No obstante, de las constancias que obran en el expediente no se advierte documento alguno que demuestre, siquiera de forma indiciaria que la afiliación de Mayte Pérez Cortés al PAN fue resultado de su voluntad libre e individual, en la cual *muto proprio* expresara su consentimiento y, por ende, proporcionara sus datos personales a fin de ser afiliada a dicho instituto político.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPC/JD02/TLAX/73/2018

En su defensa, el PAN únicamente se limitó a manifestar lo siguiente:

RPAN-0157/2018

(...)

La C. **Mayte Pérez Cortés** estuvo afiliada anteriormente a este instituto político, **causando baja del padrón de militantes en fecha 15 de noviembre de 2017**, en virtud de la aplicación del Programa Específico de revisión, verificación actualización, depuración y registro de huellas digitales, implementado por el Registro Nacional de Militantes en coordinación con la Comisión Especial Estratégica para la Transparencia y Reingeniería del Padrón de Militantes del Partido Acción Nacional.

*En lo correspondiente a la mencionada ciudadana, se informa que la aplicación del Programa correspondiente al Estado de Tlaxcala fue aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional del Partido Acción Nacional en fecha 26 de abril de 2017, habiéndose identificado con la clave CEN/SG/14/2017, mismo que se adjunta en copia simple al presente y que en su momento fue consultable en la dirección electrónica del Registro Nacional de Militantes. En este sentido, es de informarse que dicho programa fue realizado a efecto de actualizar y depurar la información del padrón de militantes del Partido Acción Nacional. Asimismo, los ciudadanos militantes de este instituto político, debieron expresar por escrito, con firma autógrafa y proporcionando su huella dactilar, la voluntad de estar afiliado al PAN, así como desconocer y renunciar a la militancia que en su caso existiere en otro partido político diferente al PAN, sin que dicha situación ocurriera con la ciudadana **Mayte Pérez Cortés**.*

Por lo anterior, y como consecuencia de la voluntad de la ciudadana, expresada al no acudir a actualizar sus datos, este instituto político procedió a procesar su baja por la causal de depuración en términos de lo establecido en el artículo 72, fracción VII, y 79 del Reglamento de Militantes, así como en el Acuerdo identificado con la clave CEN/SG/14/2017.

(...)

[Énfasis añadido]

RPAN2-0198/2018

(...)

La C. **Mayte Pérez Cortés** estuvo afiliada anteriormente a este instituto político, con fecha de inicio de militancia el **16 de abril de 2014**.

Respecto a las constancias de afiliación correspondientes (inicio de militancia), se informa que en sesión ordinaria de fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, la Comisión

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPC/JD02/TLAX/73/2018

de Afiliación del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional emitió un acuerdo por el que se autoriza al Director del Registro Nacional de Militantes para que proceda a la destrucción del papel que constituye el archivo muerto del área a su cargo existente hasta el 31 de diciembre de 2016 (Sic), (entrada en vigor de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados), se anexa copia para mayor referencia, motivo por el cual este Registro se encuentra materialmente imposibilitado para remitir la documentación solicitada.

(...)

RPAN2-0349/2018

(...)

*La **C. Mayte Pérez Cortés** estuvo afiliada anteriormente a este instituto político, con fecha de inicio de militancia el 16 de abril de 2014, **causando baja del padrón** de militantes en fecha 15 de noviembre de 2017, en virtud de la aplicación del Programa Específico de revisión, verificación actualización, depuración y registro de huellas digitales en Tlaxcala, implementado por el Registro Nacional de Militantes en coordinación con la Comisión Especial Estratégica para la Transparencia y Reingeniería del Padrón de Militantes del Partido Acción Nacional, de conformidad con el Acuerdo CEN/SG/14/2017.*

En este sentido, es de informarse que dicho programa fue realizado a efecto de actualizar y depurar la información del padrón de militantes del Partido Acción Nacional. Asimismo, los ciudadanos militantes de este instituto político, debieron expresar por escrito, con firma autógrafa y proporcionando su huella dactilar, la voluntad de estar afiliado al PAN así como desconocer y renunciar a la militancia que en su caso existiere en otro partido político diferente al PAN, sin que dicha situación ocurriera con las ciudadanas señaladas.

Por lo anterior, y como consecuencia de la voluntad de los ciudadanos, expresada al no acudir a actualizar sus datos, este instituto político procedió a procesar su baja por la causal de depuración en términos de lo establecido en los artículos 59 de los Estatutos Generales, 58, 72, fracción VII, párrafo segundo y 79 del Reglamento de Militantes, ambos del Partido Acción Nacional, así como en el Acuerdo respectivo.

Respecto a las constancias de afiliación correspondientes (inicio de militancia), se informa que en sesión ordinaria de fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, la Comisión de Afiliación del Consejo Nacional de Partido Acción Nacional emitió un acuerdo por el que se autoriza al Director del Registro Nacional de Militantes para que proceda a la destrucción del papel que constituye el archivo muerto del área a su cargo existente hasta el 31 de diciembre de 2016, (entrada en vigor de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados), motivo por el cual este Registro se encuentra materialmente imposibilitado para remitir la documentación solicitada.

*En este sentido y respecto a lo manifestado por la **C. Mayte Pérez Cortés** de no saber porque se encontraba afiliada al Partido, se informa que el procedimiento de afiliación al Partido Acción Nacional (inicio de militancia) consta de varios pasos a seguir, como lo es 1.-*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPC/JD02/TLAX/73/2018

Requisitado de la solicitud de afiliación, 2.- La realización de un curso-capacitación y 3.- La entrega de dichos formatos de manera personal en las Oficinas Municipales o estatales del Partido, de conformidad con el domicilio donde tenga su residencia, a efecto de garantizar la voluntad de los ciudadanos de querer pertenecer a este Instituto Político, blindando con ello en no incurrir en afiliaciones contrarias a lo que establece la normatividad interna del Partido y la Ley General de Partidos Políticos.

Ahora bien, como un mecanismo adicional al procedimiento afiliatorio del Partido Acción Nacional, recientemente se llevó a cabo la aprobación por parte del Comité Ejecutivo Nacional, con relación a la autorización y aplicación de los Programas Específicos de Revisión, Verificación, Actualización, Depuración y Registro de Huellas Digitales en todo el País, a implementar por el Registro Nacional de Militantes en coordinación con la Comisión Especial Estratégica para la Transparencia y Reingeniería del Padrón de Militantes del Partido Acción Nacional, a efecto de que dichos militantes manifestaran su derecho de seguir afiliados al Partido Acción Nacional y renunciando a cualquier otro instituto político distinto al PAN que pudieran estar afiliados, proporcionando sus datos actualizados registrando sus huellas digitales.

(...)

No obstante, las manifestaciones realizadas, no aportó la cédula correspondiente o documento alguno que permitiera acreditar que el registro de Mayte Pérez Cortés aconteció de forma libre, individual, voluntaria, personal y pacífica.

En efecto, se considera que, en el caso, el medio de prueba esencial para acreditar la debida afiliación de Mayte Pérez Cortés es la cédula o formato de afiliación o, en su caso, cualquier otra documentación establecida en la normativa interna del denunciado que permitiera a esta autoridad corroborar el deseo de la citada ciudadana de afiliarse a ese partido político.

Al efecto, como se precisó con anterioridad, el PAN se limitó a manifestar que en sesión ordinaria de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, la Comisión de Afiliación del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional del PAN emitió un acuerdo por el que se autorizó al Director del Registro de Nacional de Militantes para que procediera a la destrucción del papel que constituye archivo muerto de su área hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, por lo que se encontraba imposibilitado de presentar la cédula de afiliación requerida.

Sin embargo, tal argumento no lo exime de su responsabilidad de **conservar y resguardar**, con el debido cuidado, la documentación soporte en la que conste la afiliación libre y voluntaria de sus militantes o afiliados, puesto que, se insiste, le

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPC/JD02/TLAX/73/2018

corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esto es así, porque los partidos políticos, son entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, por lo que están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar la documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

En conclusión, ante los hechos denunciados originalmente, esta autoridad electoral nacional requirió al PAN para que informara si la quejosa estaba afiliada a dicho instituto político y en su caso, proporcionara las constancias correspondientes que permitieran acreditar la afiliación voluntaria de la quejosa, además de que se le emplazó por ese motivo y se dio la oportunidad para que, en vía de alegatos, manifestara lo que a su derecho conviniera, pero en ninguna de las etapas procesales realizó alegación que desvirtuara el agravio de la quejosa, ni ofreció o aportó pruebas de descargo que resultaran idóneas para eximirlo de responsabilidad.

Esto es el PAN no demostró que la afiliación de Mayte Pérez Cortés, se hubiera realizado a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento que permitiera constatar que dicha ciudadana hubiera dado su consentimiento para ser afiliada, ni mucho menos que haya permitido o entregado datos personales para ese fin, los cuales se estiman necesarios para procesar las afiliaciones, dado que estos elementos se constituyen como insumos obligados para, en su momento, llevar a cabo una afiliación., de ahí que esto sea necesario e inescindible.

Con base en ello, y ante la negativa de la denunciante de haberse afiliado al PAN, correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de pruebas idóneas, que la afiliación se llevó a cabo a través de los mecanismos legales para ello, en donde constara fehacientemente la libre voluntad de la hoy promovente, lo que no hizo,

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPC/JD02/TLAX/73/2018

siendo que el sólo hecho de aparecer inscrita en su registro electrónico es insuficiente para acreditar el ejercicio libre, personal y voluntario del derecho de afiliación a dicho instituto político.

Es decir, no basta con que la quejosa aparezca como militante del PAN en sus registros electrónicos, sino que dicho instituto político debió demostrar, con documentación soporte o pruebas idóneas, que dicha afiliación se realizó de forma libre o voluntaria o bien, que la aparición del nombre y datos de la quejosa en su padrón de militantes, fue consecuencia de un error involuntario o de alguna circunstancia diversa, pero no lo hizo.

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación al PAN implica, además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que pudiera haber servido de base o justificación al partido político para afiliar a los ahora quejosos.

Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales, tiene íntima vinculación con la indebida afiliación de la quejosa, lo cual ya quedó debidamente acreditado y, como consecuencia de ello, merece la imposición de las sanciones que se determinarán en el apartado correspondiente.

Aunado a lo anterior, cabe referir que similar criterio fue adoptado por este máximo órgano de dirección, al dictar las resoluciones INE/CG787/2016 e INE/CG53/2017,³⁸ dentro de los procedimientos sancionadores ordinarios UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y UT/SCG/Q/PRD/JL/SIN/6/2016 acumulados, y UT/SCG/Q/MECG/JD06/CHIH/4/2016, respectivamente, derivado de una falta de la misma naturaleza a la que aquí se estudia, en donde se determinó que el uso de datos personales poseía un carácter intrínseco o un elemento esencial para la configuración de una afiliación indebida.

Cabe destacar que la resolución INE/CG53/2017, fue confirmada por la *Sala Superior*, al resolver el recurso de apelación **SUP-RAP-107/2017**, donde se consideró que, ***conforme a las reglas de carga de la prueba, el partido político denunciado debía justificar que la quejosa fue afiliada voluntariamente, de manera que la prueba idónea que podía aportar al procedimiento para demostrar su***

³⁸ Aprobado en Sesión Extraordinaria del Consejo General celebrada el siete de marzo de dos mil diecisiete. Consultable en la liga de internet http://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-resoluciones/2017/03_Marzo/CGex201703-07/CGex201703-7-rp-2.1.pdf

hipótesis de inocencia, era precisamente la constancia de afiliación de la ciudadana, sin que así lo hubiera hecho.

Por lo anterior, este órgano colegiado considera pertinente declara **fundado** el presente procedimiento, pues de las constancias que obran en el expediente se concluye que el PAN infringió las disposiciones electorales tendentes a demostrar la libre afiliación de Mayte Pérez Cortés quien apareció como afiliada a dicho instituto político, por no demostrar el **ACTO VOLITIVO** de esta para ser agremiada a ese partido.

Ahora bien, más allá de la determinación de responsabilidad al partido político y la consecuente imposición de sanción, esta autoridad debe tutelar el derecho fundamental de afiliación de la quejosa, es decir, estamos frente a la defensa de un derecho humano de naturaleza político-electoral, que en términos del artículo 1° de la Constitución Federal debe ser respetado, protegido y garantizado por todas las autoridades del Estado Mexicano.

En tal sentido, se tiene que la voluntad de la denunciante es no pertenecer a ese partido político, por lo que se debe ordenar al PAN para que, en el supuesto de que la quejosa continúe en su padrón de afiliados **sin mayor trámite**, cancele su registro como militante, y hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la **DEPPP**, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, las pruebas que amparen el cumplimiento.

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017, de cinco de enero de dos mil diecisiete, en donde consideró necesario comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la DEPPP, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el INE, que lo vincule con un instituto político en particular.

CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS SANCIONES.

Una vez demostrada plenamente la comisión de las faltas denunciadas, así como la responsabilidad del PAN, en los términos detallados en el considerando que

antecede, de conformidad con lo previsto tanto en el artículo 355, párrafo 5 del COFIPE, como en el diverso 458, párrafo 5, de la LGIPE, lo procedente es determinar la sanción que corresponda a las faltas acreditadas, para lo cual se han de considerar las circunstancias en que se actualizó la contravención a la norma administrativa, como es lo relativo a la gravedad de la falta, la responsabilidad del partido político denunciado en la vulneración al bien jurídico tutelado por las normas incumplidas, así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; y, en su caso, la reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que, para individualizar la sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad, se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción electoral.

1. Calificación de la falta

A. Tipo de infracción

Partido	Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
PAN	La infracción se cometió por una acción del partido político denunciado, que transgrede disposiciones de la <i>Constitución</i> , del <i>COFIPE</i> , la <i>LGIPE</i> y la <i>LGPP</i> , en el momento de su comisión.	La conducta fue la violación a la libre afiliación y el uso no autorizado de los datos personales de Mayte Pérez Cortés, por parte del PAN.	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; y 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), t) y u)) y e) del <i>COFIPE</i> ; 443, párrafo 1, incisos a) y n); de la <i>LGIPE</i> , y 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e), t) y u) de la <i>LGPP</i> .

B. Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o prohibidas.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPC/JD02/TLAX/73/2018

En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el caso concreto, se acreditó que el PAN incluyó en su padrón de militantes a Mayte Pérez Cortés, sin demostrar que para incorporarla medio su voluntad de inscribirse como militante de dicho instituto político, violentando con ello la norma electoral, en específico las disposiciones precisadas en el recuadro inserto en el subapartado previo.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, consiste en garantizar el derecho de los ciudadanos mexicanos de optar libremente por ser o no militante de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, efectivamente consintieron libremente en ser sus agremiados y permanecer como tales.

Por otra parte, como se analizó, para la indebida afiliación se usaron los datos personales de la promovente sin que ésta hubiese otorgado su consentimiento para ello, lo cual, constituye un elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida, que a la postre debe ser sancionado por esta autoridad.

En efecto, si bien es cierto, a partir de las constancias que obran en autos no está demostrado que los datos personales hubieran sido utilizados con un propósito diverso a la afiliación, lo es también que dicha información fue necesaria para materializar la incorporación de los datos de la actora al padrón de militantes del PAN, sin que para ello mediara la voluntad de la hoy denunciante, de ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción correspondiente.

C. Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que el PAN transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que tenía obligación de observar y que tal infracción se cometió en detrimento de los derechos de una ciudadana, esta situación no conlleva estar en presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de afiliación, en el caso que el PAN incluyó en su padrón de militantes a la hoy quejosa, sin demostrar su consentimiento previo para ello.

D. Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

- a) **Modo.** En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles al PAN, consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 35, fracción III y 41, Base I, párrafo segundo, de la **Constitución**; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), t) y u); 44, párrafo 2; 342, párrafo 1, incisos a) y n), del **COFIPE** y 443, párrafo 1, incisos a) y n); de la **LGIPE** en relación con los artículos 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e), t) y u) de la **LGPP**, vinculados a su vez con lo previsto en los numerales 113, 114 y 116, de la **LGTAIP**; 110, 111, 113 y 117, de la **LFTAIP**, al incluir en su padrón de afiliados a la ciudadana denunciante, sin tener la documentación soporte que acredite fehacientemente la voluntad de esta de pertenecer a las filas del instituto político en el cual se encontró incluida, habiendo hecho uso sin consentimiento de Mayte Pérez Cortés de sus datos e información personal para llevar a cabo su afiliación.

Así pues, se tiene que el **número de afiliaciones indebidas** en el presente caso es de **una**

b) Tiempo. En el caso concreto, como se razonó en el considerando que antecede, la afiliación denunciada se dió en la temporalidad que se plasma en el cuadro siguiente:

No.	Nombre	Afiliación	Fecha de afiliación
1	Mayte Pérez Cortés	SÍ	16-04-2014

c) Lugar. Con base en las razones plasmadas en el escrito de denuncia, se deduce que las faltas atribuidas al PAN se cometieron en el estado de Tlaxcala, que es el lugar de residencia de la quejosa.

E. Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Se considera que en el caso existe una conducta **dolosa** por parte del PAN, en violación a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la Constitución Federal; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), t) y u) del *COFIPE*.

La falta se califica como **dolosa**, por lo siguiente:

- *El PAN* es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus constitucional de **entidad de interés público**, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Federal; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- *El PAN* está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de los ciudadanos, de acuerdo con el

artículo 38, párrafo 1, inciso a), del *COFIPE*, cuyo contenido se reproduce en el 25, párrafo primero, inciso a) de la *LGPP*.

- El de libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de la voluntad de cada ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.
- Todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.
- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e), del *COFIPE*, cuyo contenido se reproduce en el 25, párrafo primero, incisos a) y e) de la *LGPP*.
- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria**.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPC/JD02/TLAX/73/2018

- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales debe ser protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, es una violación de orden constitucional y legal que **requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento.**

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta se considera dolosa, porque:

- 1) La quejosa aduce que no solicitó su registro o incorporación como militante del PAN.
- 2) Quedo acreditado que la quejosa aparece en el padrón de militantes del PAN.
- 3) El PAN no demostró que la afiliación de la quejosa se hubiera realizado a través de los mecanismos legales y partidarios conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y voluntaria de la denunciante.
- 4) El partido denunciado no demostró, ni probó que la afiliación de la quejosa fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aún indiciaria, para estimar que la afiliación de la quejosa fue debida y apegada a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.

F. Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el PAN, se cometió al afiliar indebidamente a Mayte Pérez Cortés, sin demostrar el acto volitivo de esta para ingresar a su padrón de militantes o de haber proporcionado sus datos personales para ese fin.

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en garantizar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, mediante la conservación de los documentos atinentes que permitan demostrar el acto de voluntad de los ciudadanos quejosos de militar en los distintos partidos políticos.

2. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A) Reincidencia

Por cuanto a la **reincidencia** en que pudo haber incurrido el partido materia de esta Resolución, este organismo electoral autónomo considera que **no se actualiza**.

De conformidad con el artículo 355 párrafo 6 del *COFIPE*, cuyo contenido reproduce el diverso 458, párrafo 6 de la *LGIFE*, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el mencionado Código, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, la Sala Superior ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);

2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
3. Que en ejercicios anteriores el infractor **haya sido sancionado por esa infracción mediante Resolución o sentencia firme.**

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el *Tribunal Electoral*, a través de la Tesis de Jurisprudencia **41/2010**, de rubro **REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.**³⁹

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con anterioridad.

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta.

En este sentido, debe precisarse que, en el presente asunto, no puede considerarse actualizado dicho supuesto por cuanto hace *al PAN*, pues en los archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya sancionado a ese instituto político por los hechos materia de la presente denuncia.

B) Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

³⁹ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPC/JD02/TLAX/73/2018

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, pues se comprobó que el PAN afilió a **UNA** ciudadana, sin demostrar que contaba con la documentación soporte correspondiente, de que medió la voluntad de la misma para pertenecer a dicho instituto político.
- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, de optar por ser o no militante de algún partido político, y la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.
- Para materializar la indebida afiliación de la denunciante, se utilizaron indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para formar parte del padrón de militantes del PAN.
- No existió un beneficio por parte del partido denunciado, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.

- No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral.
- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso Electoral.
- No existe reincidencia por parte del PAN.

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente **calificar la falta** en que incurrió el PAN como de **gravedad ordinaria**, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el partido denunciado dolosamente infringió el derecho de libre afiliación de los quejosos, lo que constituye una violación al derecho fundamental de los ciudadanos reconocidos en la *Constitución*.

C) Sanción a imponer

Ahora bien, la mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción.

Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor entidad.⁴⁰

El artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIPE*, dispone el catálogo de sanciones a imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México; reducción de hasta el cincuenta por

⁴⁰ Véase la tesis XXVIII/2003 de la Sala Superior, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.

ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita; y en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la *Constitución* y de la Ley Electoral, con la cancelación de su registro como partido político.

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción (especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción acreditada), así como la conducta realizada por el PAN se determina que debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida.

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la *LGIPE*, confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que, a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realice una falta similar.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que la *LGIPE*, no determina pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo establece las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPC/JD02/TLAX/73/2018

Asimismo, es importante tomar en cuenta el número de ciudadanos afiliados indebidamente al PAN, es decir, **UNA CIUDADANA**.

Con base en lo anterior, este *Consejo General* estima que, derivado de las circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida al PAN, justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGIPE*, consistente en una **MULTA**, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto.

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la sanción a imponer.

En este orden de ideas, es pertinente hacer notar, que ha sido criterio de esta autoridad, al resolver los procedimientos UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y su acumulado, y UT/SCG/Q/MECG/JD06/CHIH/4/2016, el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis y siete de marzo de dos mil diecisiete, respectivamente —y que fue reiterado en el diverso SCG/Q/FSG/CG/33/INE/80/2014 y su acumulado SCG/Q/JAEB/JL/CHIH/37/INE/84/2014, resuelto por este órgano máximo de dirección el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, bajo la clave

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPC/JD02/TLAX/73/2018

INE/CG401/2017—, en los que se sancionó por una indebida afiliación de un ciudadano, en cada caso, con una multa equivalente a 642 (seiscientos cuarenta y dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento de la comisión de la conducta, sanción que se estima debe tomarse como base para el presente asunto, si se considera que en dichos asuntos se demostró la comisión de una infracción similar a la que acontece en los casos que aquí se resuelven.

En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta causa, es claro que la individualización de la sanción aplicada con motivo de la afiliación indebida de los ciudadanos a los partidos políticos denunciados, debe resultar proporcional al número de ciudadanos en cuyo perjuicio se cometió la falta, sin perder de vista las condiciones socioeconómicas de cada instituto político, y no simplemente, los hechos denunciados y acreditados en el presente procedimiento, a fin de que la sanción que se imponga resulte efectivamente proporcional sin ser excesiva.

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad debe determinar su monto o cuantía, **tomando en cuenta** las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar de forma individual la multa que corresponda.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración que la graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión

que tiene sustento en la Tesis relevante **XXVIII/2003**,⁴¹ emitida por el *Tribunal Electoral*, misma que a letra establece:

SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.- *En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.*

Ahora bien, como se precisó con anterioridad se impone al PAN una multa equivalente a **seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente en la CDMX al momento de la comisión de la conducta**, por la afiliación indebida de Mayte Pérez Cortés, así como el uso indebido de sus datos personales.

En virtud de que la ciudadana denunciante fue afiliada en 2014, a fin de adoptar la postura más favorable para los partidos políticos y reducir a la mínima expresión posible el carácter represor con que actúa el estado en los procedimientos de tipo sancionador, es que, para el cálculo de la multa correspondiente, se debe tomar en cuenta el salario mínimo vigente al momento de la afiliación y, una vez obtenido el monto deberá hacerse la conversión a Unidades de Medida y Actualización.

Al respecto, es un hecho notorio que se invoca en términos de lo establecido en el artículo 358 del COFIPE, cuyo contenido es congruente con el diverso 461 de la LGIPE, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fija anualmente los montos respectivos, mismo que al ser relacionado con la fecha de afiliación, de la ciudadana indebidamente afiliada arroja lo siguiente:

⁴¹ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPC/JD02/TLAX/73/2018

No.	Ciudadanos	Fecha de afiliación	Salario Mínimo	Sanción a imponer
1	Mayte Pérez Cortés	16/04/2014	\$67.29 ⁴²	\$43,200.18
TOTAL				\$43,200.18 [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].

Ahora bien, es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución —efectuado por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones.

Lo anterior, se robustece con lo establecido en la Jurisprudencia de la Sala Superior 10/2018, de rubro y texto:

MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN. - De la interpretación sistemática de los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transitorios segundo y tercero del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como 44, párrafo primero, inciso aa), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando en consideración el principio de legalidad que rige en los procedimientos sancionadores, se advierte que el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del ilícito.

En esas condiciones, lo procedente es transformar la sanción que se considera idónea, expresada en salarios mínimos, a Unidades de Medida y Actualización para lo cual es necesario dividir el monto inicial (seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México multiplicado por el salario mínimo vigente en 2014), entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, misma que equivale, para el ejercicio fiscal en curso, a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.).

⁴² http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5328055&fecha=26/12/2013

De esta manera, al aplicar la fórmula mencionada, se obtiene lo siguiente:

En el presenta caso, la ciudadana fue afiliada en 2014, por lo que se debe dividir el monto inicial (seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente en 2013, multiplicado por \$67.29) equivalente a **\$43,200.18 (Cuarenta y tres mil doscientos 18/100 M.N)** entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, correspondiente a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.). De lo anterior se obtiene que la sanción a imponer es una multa equivalente a **535.98 (quinientos treinta y cinco punto noventa y ocho)** Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a **43,199.98 (cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve 98/100 M.N)**

Debe precisarse que se considera que la multa impuesta al PAN constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, ya que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, se concluye que la misma resulta eficaz y proporcional.

D) El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la infracción

Se estima que la infracción cometida por parte del PAN, aun cuando causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de la infracción.

E) Las condiciones socioeconómicas del infractor

Sobre este punto, es preciso señalar que conforme al Acuerdo INE/CG339/2017, emitido por este *Consejo General* el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se estableció que, entre otros, *el PAN* recibiría mensualmente en el presente ejercicio, por concepto de financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes, la siguiente cantidad:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPC/JD02/TLAX/73/2018

SUJETO	Monto del financiamiento público para el sostenimiento de Actividades Ordinarias del 2018
PAN	\$ 68,993,261.8

Ahora bien, según fue informado por la *DEPPP*, a través del oficio **INE/DEPPP/DE/DPPF/5693/2018**, el monto de la ministración mensual correspondiente al mes de septiembre de dos mil dieciocho, debía ser ajustado en función de las sanciones administrativas pendientes de cubrir por dicho instituto político nacional, por lo cual la cifra total a recibir sería la siguiente:

SUJETO	IMPORTE DE LA MINISTRACIÓN DE SEPTIEMBRE DE 2018	IMPORTE TOTAL DE LAS SANCIONES SEPTIEMBRE 2018	IMPORTE DEL REINTEGRO DEL FINANCIAMIENTO LOCAL PARA GASTOS DE CAMPAÑA	IMPORTE NETO DE LA MINISTRACIÓN
NA	\$68,993,261.00	\$180,672	\$0.00	\$68,812,589.00

F) Impacto en las actividades del sujeto infractor

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta al PAN, no es de carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida, respecto al monto del financiamiento que recibirá por concepto de actividades ordinarias permanentes en el mes de septiembre del año en curso, representa el siguiente porcentaje:

Año	Monto de la sanción por ciudadano	Ciudadanos indebidamente afiliados	% de la ministración mensual⁴³
2014	\$43,199.98	1	%.062

Por consiguiente, la sanción impuesta al PAN no es de carácter gravoso, si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual correspondiente al mes de septiembre de este año.

⁴³ Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción cometida por el PAN (especialmente los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con el financiamiento que recibe del INE para el mes de septiembre de dos mil dieciocho, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político sancionado.

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el partido político de mérito —tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagar sin que ello afecte sus operaciones ordinarias, además de que las sanciones son proporcionales a las faltas cometidas y se estima que, sin resultar excesivas ni ruinosas, pueden generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la Sala Superior en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-250/2009⁴⁴, es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

QUINTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE LA QUEJOSA COMO MILITANTE.

En tal sentido, se tiene que la voluntad de la denunciante es no pertenecer al PAN, por lo que se debe vincular al partido político, para que, de ser el caso, en el supuesto de que la quejosa continúe en su padrón de militantes, **, sin mayor trámite, cancele su registro, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentó su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la DEPPP, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, los medios de prueba que amparen el cumplimiento.

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017,⁴⁵ de cinco de enero del año en curso, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un

⁴⁴ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm>

⁴⁵ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/JDC/2/SUP_2017_JDC_2-626321.pdf

ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el *INE*, que lo vincule con un instituto político en particular.

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN.

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la Constitución Federal,^[1] se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el numeral 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como a través del juicio para la protección de los derechos político- electorales del ciudadano, previsto en el artículo 79 del referido ordenamiento legal, para el caso de la denunciante.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara **fundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra del Partido Acción Nacional, al infringir las disposiciones electorales de libre afiliación de una ciudadana, en términos de lo establecido en el Considerando TERCERO de la presente Resolución.

SEGUNDO. En términos del Considerando **CUARTO** de la presente Resolución, se impone al Partido Acción Nacional, **una multa por la indebida afiliación de Mayte Pérez Cortés**, conforme al monto que se indica a continuación:

^[1] Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: "**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**", y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: "**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.**"

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MPC/JD02/TLAX/73/2018

No.	Quejoso	Sanción a imponer
1	Mayte Pérez Cortés	535.98 (quinientos treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, equivalente a \$43,199.98 (cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve 98/100 M.N) [Ciudadana afiliada en 2014]

TERCERO. En términos de lo establecido en el artículo 458, párrafo 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el monto de la multa impuesta al Partido Acción Nacional, será deducido de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su Considerando CUARTO.

CUARTO. Se vincula al *PAN* para que, de ser el caso, en el supuesto que la quejosa continúe en su padrón de militantes, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentó su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, los medios de prueba que amparen el cumplimiento, conforme a lo dispuesto en su Considerando QUINTO.

QUINTO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, previsto en el artículo 79 del referido ordenamiento legal, para el caso de la denunciante.

Notifíquese personalmente a Mayte Pérez Cortés.

Así como al Partido Acción Nacional, por conducto de su respectivo representante ante este Consejo General; y por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1234/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO
EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/CAE/JL/HGO/79/2018
DENUNCIANTE: CELESTINO ÁBREGO
ESCALANTE
DENUNCIADO: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/CAE/JL/HGO/79/2018 QUE SE DERIVA DE LA QUEJA PRESENTADA POR CELESTINO ÁBREGO ESCALANTE, QUIEN PRESENTÓ ESCRITO POR EL CUAL HIZO DEL CONOCIMIENTO DE ESTA AUTORIDAD HECHOS PRESUNTAMENTE CONTRAVENTORES DE LA NORMATIVIDAD ELECTORAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ATRIBUIBLES AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

Ciudad de México, 12 de septiembre de dos mil dieciocho.

GLOSARIO	
INAI	Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
INE	Instituto Nacional Electoral
LGIPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
LGPP	Ley General de Partidos Políticos
PRD	Partido de la Revolución Democrática

GLOSARIO	
<i>Supuesta omisión del PRD de publicar en su portal de Internet la lista definitiva de candidatos al Senado</i>	La supuesta omisión del Partido de la Revolución Democrática de publicar en su portal de internet la lista definitiva de candidatos y/o candidatas al Senado de la República por los principios de mayoría relativa y representación proporcional relacionada con la convocatoria al IX Consejo Nacional de dicho instituto político, celebrado el dieciocho de noviembre de dos mil diecisiete.
<i>Sala Superior</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

ANTECEDENTES

I. Sentencia de la Sala Superior.¹ El veintidós de marzo del año en curso, el máximo órgano jurisdiccional de la materia dictó sentencia en el medio de impugnación identificado con la clave de expediente SUP-JDC-110/2018,² en la que estableció, en la parte que interesa, lo siguiente:

“30. Sin embargo, del análisis integral del escrito de queja se advierte que la verdadera intención del ahora actor consistía en denunciar el supuesto incumplimiento del PRD de publicar la lista definitiva de candidatas y/o candidatos al Senado de la República por los principios de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional para el Proceso Federal Electoral 2017-2018. Y que, en el caso, la solicitud de certificar las páginas de internet oficiales y las redes sociales del PRD, sólo era con el objetivo de evidenciar el referido incumplimiento más no su causa central de pedir; sino, como ya se dijo, un elemento de prueba de los hechos denunciados.

...

32. De ello, se advierte que el ahora actor planteó supuestas violaciones a la normativa electoral por parte del PRD consistentes en la omisión de publicar las listas de candidatos a senadores por los principios de Mayoría Relativa y Representación

¹ Visible a páginas 48-61 del expediente.

² Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-0110-2018.pdf

Proporcional y solicitó las diligencias de certificación de las páginas oficiales y redes sociales del referido partido político con la finalidad de verificar los hechos materia de la queja y evitar la posterior manipulación de las referidas páginas.

33. En ese sentido, dado que la autoridad responsable se limitó a señalar que se trataba de una petición para la expedición de certificaciones y a partir de ello, declara improcedente el escrito, lo fundado del motivo de inconformidad deriva de que la pretensión del ciudadano Celestino Ábrego Escalante, fue la de instar a la autoridad a iniciar un procedimiento sancionador por el incumplimiento del PRD a normas partidistas, ofreciendo como prueba, las certificaciones de diversas páginas de internet para su valoración y estudio en la resolución que se emitiera en el procedimiento, y no únicamente la de obtener impresiones certificadas de diversos sitios de internet.

34. En consecuencia al resultar **fundada** la materia de disenso hecha valer por el actor en el presente juicio, se ordena a la responsable que conforme a lo establecido en los artículos 459, 464 y 465 de la LGIPE, así como los artículos 1, 10, 14 y 45 del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE, le dé trámite al escrito presentado por Celestino Ábrego Escalante como queja y lo remita a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral para que en su caso se apertura el procedimiento ordinario sancionador y de acreditarse las violaciones emita la sanción que corresponda.”

II. Registro, reserva de admisión o desechamiento e investigación preliminar.³

El veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo por recibida la documentación referida en el Antecedente I, y se ordenó el registro del procedimiento sancionador ordinario, al cual se le asignó la clave **UT/SCG/Q/CAE/JL/HGO/79/2018**, por la presunta violación de la normatividad electoral en materia de transparencia, por parte del *PRD*.

En el acuerdo en cita, se reservó la admisión o desechamiento del asunto; asimismo, se ordenó la instrumentación de acta circunstanciada⁴ respecto a la certificación del contenido de las diversas páginas de internet referidas por el quejoso.

III. Requerimiento al *PRD*. Mediante acuerdo de nueve de abril del año en curso,⁵ con el objeto de proveer lo conducente y contar con los elementos necesarios para la debida integración del presente asunto, se procedió a requerir al *PRD*, conforme a lo siguiente:

³ Visible a páginas 62-67 del expediente.

⁴ Visible a páginas 70-90 y anexo a 91 del expediente.

⁵ Visible a páginas 93-97 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CAE/JL/HGO/79/2018

Oficio-Fecha de notificación	Oficio- Fecha de Respuesta
INE-UT/4417/2018 ⁶ 13 de abril de 2018	Oficio CEMM-381-2018 ⁷ 18 de abril de 2018

IV. Acta circunstanciada.⁸ Mediante acuerdo de dieciocho de abril de dos mil dieciocho,⁹ se ordenó la instrumentación de acta circunstanciada respecto a la certificación del contenido de la páginas de internet referidas por el *PRD*.

V. Requerimiento a la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales del INE. A través del acuerdo de dos de mayo de dos mil dieciocho¹⁰, se determinó requerir al Titular de la Unidad Técnica en cita, a fin de que proporcionara diversa información relacionada con los hechos denunciados.

Oficio-Fecha de notificación	Oficio-Fecha de respuesta
INE-UT/6052/2018 ¹¹ 03 de mayo de 2018	Oficio INE/UTyPDP/DAIPDP/024/2018 ¹² 08 de mayo de 2018

VI. Requerimiento al INAI. Mediante acuerdos de ocho¹³ y dieciséis¹⁴ de mayo de dos mil dieciocho, se determinó requerir al Consejero Presidente del INAI, a fin de que proporcionara diversa información relacionada con los hechos denunciados.

Oficio-Fecha de notificación	Oficio-Fecha de respuesta
INE-UT/6724/2018 ¹⁵ 10 de mayo de 2018	Sin respuesta
INE-UT/7447/2018 ¹⁶ 22 de mayo de 2018	Oficio INAI/SAI/DGEPPPOED/0276/18 ¹⁷ 23 de mayo de 2018 Oficio INAI/SAI/DGEPPPOED/0287/18 ¹⁸ 24 de mayo de 2018

⁶ Visible a página 99 del expediente.

⁷ Visible a páginas 104-107 del expediente.

⁸ Visible a páginas 112-115 y anexo a 116 del expediente.

⁹ Visible a páginas 108-110 del expediente.

¹⁰ Visible al 118-121 del expediente.

¹¹ Visible a página 123 del expediente.

¹² Visible a páginas 125-133 del expediente.

¹³ Visible al 134-139 del expediente.

¹⁴ Visible al 149-153 del expediente.

¹⁵ Visible a página 144 del expediente.

¹⁶ Visible a página 154 del expediente.

¹⁷ Visible a página 157-160 del expediente.

¹⁸ Visible a página 161-162 del expediente.

VII. Elaboración de proyecto. En su oportunidad, toda vez que no había diligencias pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la Comisión de Quejas y Denuncias del *INE*.

VIII. Sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias. En la Octogésima Cuarta Sesión Extraordinaria urgente de carácter privado, celebrada el seis de septiembre de dos mil dieciocho, la Comisión de Quejas, aprobó el proyecto por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, presentes en la sesión.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA. El Consejo General del *INE* es competente para pronunciarse sobre los proyectos de resolución de los procedimientos sancionadores ordinarios que le sean turnados por la Comisión de Quejas y Denuncias, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta denunciada por Celestino Ábrego Escalante, es el presunto incumplimiento del partido político denunciado a la normatividad en materia de transparencia, con motivo de la *supuesta omisión del PRD de publicar en su portal de Internet la lista definitiva de candidatos al Senado*.

SEGUNDO. ANTECEDENTES GENERALES SOBRE LA QUEJA PROMOVIDA POR CELESTINO ÁBREGO ESCALANTE, RESPECTO A LA SUPUESTA OMISIÓN DEL PRD DE PUBLICAR EN SU PORTAL DE INTERNET LA LISTA DEFINITIVA DE CANDIDATOS AL SENADO.

Es necesario señalar que Celestino Ábrego Escalante promovió distintos medios de impugnación sobre el tema materia del presente expediente, esto es respecto a la *supuesta omisión del PRD de publicar en su portal de Internet la lista definitiva de*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CAE/JL/HGO/79/2018

candidatos al Senado. Dichos medios de impugnación fueron conocidos y resueltos por la Sala Superior, conforme a lo siguiente:

SUP-AG-22/2018¹⁹

Acuerdo de *Sala Superior* dictado el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho.

“RESULTANDO:

1. Escrito. El veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, el compareciente presentó ante la Oficialía de Partes de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado Hidalgo, escrito por el que solicita se realice la inspección de distintas páginas en internet del Partido de la Revolución Democrática.

...

CONSIDERANDO

...

SEGUNDO. Acuerdo de Sala.

...

Como puede advertirse con claridad, la verdadera intención del promovente es que el Instituto Nacional Electoral a través de sus órganos competentes, realice la inspección y verificación de distintas páginas de internet que, afirma, se relacionan con el Partido de la Revolución Democrática, específicamente, en cuanto a la realización del IX Consejo Nacional y las actuaciones de la Comisión Nacional Electoral del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido político, a efecto de que inicie una investigación para esclarecer los hechos que se mencionan en el ocurso, pero no así a la promoción o interposición de un medio de defensa en materia electoral.

...

Ciertamente, del examen acucioso del escrito se desprende que su promovente no impugna alguna resolución o acto electoral, ni establece alguna pretensión de reparación judicial a algún derecho político electoral, sino que, en todo caso, pretende la intervención del Instituto Nacional Electoral con el propósito de que éste verifique y realice la certificación de lo que a su juicio son situaciones irregulares cometidas por el órgano del PRD antes mencionado, así como que en ejercicio de sus facultades de investigación, esclarezca los hechos denunciados, los cuales en su concepto son cerciorables mediante las páginas de internet que precisa en su ocurso.

...

Por los motivos antes expuestos, a juicio de esta Sala Superior, procede remitir el presente asunto a la Junta Local Ejecutiva mencionada, para que, en el uso de sus facultades, se pronuncie sobre las peticiones que plantea Celestino Ábrego Escalante respecto de la

¹⁹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-AG-0022-2018.pdf

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CAE/JL/HGO/79/2018

inspección y verificación de distintas redes sociales, con la finalidad de que resuelva lo que en derecho corresponda de manera fundada y motivada.

El sentido de lo acordado de ninguna manera coloca en estado de indefensión al promovente, pues éste ya ha tenido acceso a la tutela judicial y el recurso efectivo ante esta Sala Superior a través de los SUP-JDC-74/2018, **SUP-JDC-77/2018**, SUP-JDC-78/2018 y SUP-JDC-79/2018, resueltos en sesiones privadas de veintisiete y veintiocho de febrero del año en curso, en los cuales reclamó el procedimiento, los resultados y la falta de publicidad de la designación de candidatos para la presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales por los principios de mayoría relativa y representación proporcional de las que el actor se ostentó como precandidato por ambos principios.

En dichos acuerdos, este Tribunal Constitucional determinó reencauzar las demandas de los juicios ciudadanos señalados en el párrafo inmediato anterior, por un lado, a la Comisión Jurisdiccional Nacional del PRD, a través del recurso intrapartidista denominado queja electoral -por cuanto hace a los primeros dos juicios- por ser dicha instancia la competente y esa vía la idónea para resolver y reparar las posibles violaciones a los derechos político-electorales del promovente y, por otra, a la Sala Regional de la Quinta Circunscripción Plurinominal de este Tribunal Electoral, con sede en la Ciudad de Toluca, para que conozca de la omisión de la citada Comisión de resolver las quejas que le fueron presentadas en su momento, de ahí que ello asegura la tutela de tales derechos.

...

A C U E R D A

...

SEGUNDO. Remítanse el asunto a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Hidalgo para los efectos precisados en esta ejecutoria, previa copia certificada que se deje en autos.”

Es importante destacar que, aunque en el Acuerdo de Sala antes referido se alude a diversos medios de impugnación promovidos por Celestino Ábrego Escalante, lo cierto es que lo relacionado con el tema que nos ocupa se centra en el diverso SUP-JDC-77/2018:

SUP-JDC-77/2018²⁰

Acuerdo de la Sala Superior dictado el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho.

²⁰ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: [http://187.141.6.45/siscon/gateway.dll/nSentencias/nSuperior/nSENSUP2018/jdc/sup-jdc-0077-2018-acuerdo1.htm?fn=document-frame.htm\\$f=templates\\$3.0](http://187.141.6.45/siscon/gateway.dll/nSentencias/nSuperior/nSENSUP2018/jdc/sup-jdc-0077-2018-acuerdo1.htm?fn=document-frame.htm$f=templates$3.0)

“R E S U L T A N D O:

1. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veinticinco de febrero de dos mil dieciocho, en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Celestino Ábrego Escalante promovió, *per saltum*, juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano contra omisiones de la Comisión Nacional Electoral y del Comité Ejecutivo Nacional, ambos del Partido de la Revolución Democrática^[1], consistentes en: **i) la falta de publicación del acuerdo de integración final de la lista nacional de candidatos al cargo de Senadores por el principio de representación proporcional para el Proceso Electoral Federal 2017-2018;** así como, **ii) no dar a conocer el resultado del cómputo de la elección de candidatos a Senadores por el principio de Representación Proporcional.**

...

C O N S I D E R A N D O:

...

SEGUNDO. Hechos relevantes. Los hechos que dieron origen al acto impugnado, consisten medularmente en los siguientes:

1. Emisión de la convocatoria. El dieciocho de noviembre de dos mil diecisiete, el Décimo Primer Pleno Extraordinario del IX Consejo Nacional del PRD aprobó la *“Convocatoria para elegir a las candidatas y los candidatos del Partido de la Revolución Democrática para la Presidencia de la República de los Estados Unidos Mexicanos; a las senadurías que integran la Cámara de Senadores; las diputaciones federales de la Cámara de Diputados, estas dos últimas por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, que integran la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en el Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018”*.^[5]

2. Registro de precandidatos. En términos de la Base Cuarta de la convocatoria, el registro de aspirantes a precandidatos y precandidatas a las Senadurías y Diputaciones Federales **por el principio de representación proporcional**, se llevó a cabo entre los días tres al siete de febrero de dos mil dieciocho.

En su demanda, el actor señala que el día nueve de febrero del año en curso, solicitó su registro como candidato a Senador de representación proporcional del PRD con la calidad afirmativa de indígena ante la Comisión Nacional Electoral. Asimismo, enfatiza que el día once de febrero de dos mil dieciocho, obtuvo la constancia de registro como precandidato a Senador en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, por el Estado de Hidalgo con el número de Folio 81111916.

3. Pleno del IX Consejo Nacional del PRD. Los días once y diecisiete de febrero de dos mil dieciocho, se llevó a cabo el Décimo Cuarto Pleno Extraordinario del IX Consejo

Nacional con carácter electivo de los candidatos a Senadores y Diputados Federales de mayoría relativa y representación proporcional a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión.

4. Cambio de sede del Décimo Cuarto Pleno Extraordinario del IX Consejo Nacional. El actor refiere que, el mismo diecisiete de febrero del año en curso, a las once horas con cincuenta minutos, durante la celebración del Décimo Cuarto Pleno Extraordinario del IX Consejo Nacional, se acordó un receso para las siguientes horas, sin que se manifestara un cambio de sede.

En este orden, el actor precisa que el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, fue de su conocimiento que, el Décimo Cuarto Pleno Extraordinario del IX Consejo Nacional se celebró en una sede alterna, desconocida, en la que resultaron electos los integrantes de las listas de senadores por el principio de representación proporcional, sin que a la fecha exista publicación oficial alguna de ésta, donde se haya dado a conocer el resultado del cómputo de la elección, o bien, la lista de candidatos electos.

TERCERO. Improcedencia del *per saltum* y reencauzamiento a la instancia intrapartidista

...

Sin embargo, por un lado, **los actos que se impugnan en el presente juicio ciudadano son de naturaleza omisiva relacionados directamente con la falta de publicidad del resultado del proceso de integración final de la lista nacional de candidatos a senadores por el principio de representación proporcional;** y, por otro lado, en el diverso juicio ciudadano mencionado en el párrafo anterior, el actor combatió el **procedimiento** para la selección de dichos candidatos. En otras palabras, mientras que en la demanda que se estudia el actor se limitó a impugnar la falta de publicidad del **resultado** de selección de candidatos a senadores por el principio de representación proporcional; en el diverso juicio relacionado, se impugnó el **procedimiento** en sí mismo y su resultado; por lo tanto, es inconcuso que su impugnación resulta autónoma y debe ser dilucidada por la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD, a través de la queja partidista correspondiente.

...

CUARTO. Decisión. En consecuencia, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordena el reencauzamiento del presente medio de impugnación a queja electoral, para el efecto de que **la Comisión Jurisdiccional resuelva, en plenitud de atribuciones, lo que jurídicamente corresponda.** Por ende,

A C U E R D A

...

SEGUNDO. Para los efectos precisados, **se reencauza** este medio de impugnación a queja electoral competencia de la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, para que resuelva lo que en derecho corresponda.

[Énfasis añadido]

Derivado de la omisión de la Comisión Nacional Jurisdiccional del *PRD* de resolver la queja que le fue reencauzada por la *Sala Superior*, Celestino Ábrego Escalante promovió juicio ciudadano, el cual fue radicado por el máximo órgano jurisdiccional de la materia con el expediente SUP-JDC-155/2018, en el que se determinó, en lo que interesa, lo siguiente:

SUP-JDC-155/2018²¹

Sentencia de veintinueve de marzo de dos mil dieciocho

“S E N T E N C I A

...en el sentido de declarar fundada la omisión de la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática de resolver los medios de impugnación reencauzados SUP-JDC-74/2018 y SUP-JDC-77/2018...

A N T E C E D E N T E S:

...

6. Segundo juicio ciudadano SUP-JDC-77/2018. El veinticinco de febrero del presente año, el ahora actor presentó escrito de demanda ante la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, mediante el cual promovió vía per saltum, juicio ciudadano a fin de impugnar diversas omisiones de la Comisión Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional, ambos del PRD, consistentes en: **i) la falta de publicación del acuerdo de integración final de la lista nacional de candidatos al cargo de Senadores de la República por el principio de representación proporcional para el Proceso Electoral Federal 2017-2018;** así como, ii) no dar a conocer el resultado del cómputo de la elección de candidatos a Senadores por el principio de representación proporcional; radicado con la clave SUP-JDC-77/2018.

...

C O N S I D E R A N D O:

...

TERCERO. Estudio de fondo.

²¹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-0155-2018.pdf

...

II. Análisis de la controversia

...

36. Respecto del acuerdo relativo al expediente SUP-JDC-77/2018, este órgano jurisdiccional determinó remitir el escrito impugnativo a la referida Comisión Nacional Jurisdiccional para que, en plenitud de atribuciones, resolviera lo que jurídicamente correspondiera.

37. Las determinaciones correspondientes a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificados con las claves SUP-JDC-74/2018 y SUP-JDC-77/2018, en las que no se señaló un plazo específico para que el órgano de justicia partidaria resolviera los escritos impugnativos en plenitud de atribuciones, debe entenderse que implicaron la obligación de resolver dentro de un lapso razonable atendiendo las particularidades del caso concreto y en plena conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

...

45. Conforme a todo lo antes expuesto, la Comisión Jurisdiccional del PRD ha sido omisa de manera injustificada en resolver los medios impugnativos referidos, lo cual afecta la tutela efectiva de derechos del actor; por lo que se deben tomar las medidas necesarias para que se restituya al promovente en el derecho a la impartición de justicia partidaria transgredido, atento a lo previsto en el artículo 84, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

...

55. CUARTO. Efectos

56. a) Se ordena a la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD, que, dentro del plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, resuelva y notifique los medios de impugnación reencauzados por esta Sala Superior a través de los acuerdos de Sala emitidos en los expedientes SUP-JDC-74/2018 y SUP-JDC-77/2018.”

[Énfasis añadido]

Atento a lo anterior, la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD radicó la queja presentada por Celestino Ábrego Escalante como recurso de inconformidad bajo el número de expediente INC/NAL/199/2018, en la que se determinó, esencialmente, lo siguiente:

INC/NAL/199/2018²²

Determinación de veinticinco de marzo de dos mil dieciocho.

²² Consultable en la dirección electrónica: <http://jurisdiccional.prd.org.mx/documentos/INC-NAL-199-2018.pdf>

“RESULTANDO

...

18. Que siendo las doce horas con veinticinco minutos del día veintitrés de marzo de dos mil dieciocho esta Comisión Nacional Jurisdiccional recibió [...] oficio..., mediante el cual se notificó a este órgano jurisdiccional partidista el Acuerdo de Sala de fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho dictado por los Magistrado de dicha Sala Superior, en el expediente SUP-JDC-129/2018, relativo al Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano promovido por CELESTINO ÁBREGO ESCALANTE, en su calidad de militantes, Consejero y Precandidato a Senador por el Principio de Representación Proporcional, a fin de impugnar:

...

D) La omisión de la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional para dar a conocer la integración definitiva de la lista de candidatos.

...

CONSIDERANDO

...

III. Litis o controversia. La materia de la presente Resolución:

...

D) La omisión de la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional para dar a conocer la integración definitiva de la lista de candidatos.

...

V. Análisis de las causales de improcedencia y sobreseimiento. Que esta Comisión Nacional Jurisdiccional previo al análisis de los agravios planteados en la queja de mérito, procede a establecer si se actualiza alguna de las causales de improcedencia y sobreseimiento establecidas en la normatividad interna; lo anterior, por ser una cuestión de estudio preferente.

...

Por cuanto hace al agravio consistente en la supuesta falta de publicación de los resultados en la página de internet de la Comisión Electoral, de autos se desprende que de manera previa el actor impugnó, la omisión de dar a conocer el resultado de la elección de mérito; a su recurso, el actor anexa acuse de recibo de la Oficialía de Partes de la Sala Superior del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, de fecha veinticinco de febrero de dos mil dieciocho.

En virtud de lo anterior, esta Comisión Nacional Jurisdiccional está en aptitud de declarar improcedente dicho motivo de agravio, consistente en la falta de publicación de los resultados de la elección en la página de internet del órgano electoral.

A este respecto debe decirse que el sistema de medios de impugnación en materia electoral no considera factible la ampliación de la demanda o la presentación de un nuevo líbelo planteando el mismo agravio aducido en un escrito anterior, aun cuando esto se efectuó dentro del plazo que la norma señala para la presentación del medio

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CAE/JL/HGO/79/2018

de defensa, lo anterior, atento a lo que establece el principio de preclusión, consistente según Couture, *en la perdida, extinción o consumación de una facultad procesal*. En la especie, dicha perdida surge por haberse ejercido ya una vez, válidamente, esa facultad.

De esta forma, es inadmisibile, la repetición del ejercicio del propio derecho de acción a través de la presentación, en fechas veinticinco de febrero y diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, de dos escritos aduciendo hechos y motivos de agravio sobre el mismo caso. Así, se advierte la necesaria aplicación de la regla de la consumación procesal, la que se hace consistir básicamente en que una facultad no puede ejercerse dos veces.

...

Por lo que se arriba a la conclusión de que el actor agotó su derecho de acción al haber presentado en fecha veinticinco de febrero del presente año, un recurso en contra de la presunta omisión de la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional, de publicar los resultados de la elección de la lista de Candidatos del Partido de la Revolución Democrática a Senadores de la República para el Proceso Electoral Federal ordinario 2017-2018.

...

RESUELVE

ÚNICO. De conformidad con lo vertido en el Considerando **V** de esta Resolución, se **DESECHA** por improcedente el recurso de inconformidad promovido por **CELESTINO ÁBREGO ESCALANTE**, registrado con la clave **INC/NAL/199/2018**.”

Finalmente, ante la determinación adoptada por la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD, Celestino Ábrego Escalante interpuso juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, el cual fue radicado bajo la clave de expediente SUP-JDC 197/2018, en el que se determinó, en lo que interesa, lo siguiente:

SUP-JDC-197/2018²³

Sentencia de once de abril de dos mil dieciocho.

“La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dicta sentencia en el juicio citado al rubro, en el sentido de desechar la demanda presentada

²³ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-0197-2018.pdf

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CAE/JL/HGO/79/2018

por Celestino Ábrego Escalante para controvertir la resolución emitida por la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática.

ANTECEDENTES:

...

8. Segundo Juicio ciudadano SUP-JDC-77/2018. El veinticinco de febrero posterior, el actor presentó nuevo juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, per saltum, ante la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, contra: (i) la omisión de publicar el acuerdo de integración final de la lista nacional de candidatos al cargo de Senadores por el principio de representación proporcional para el Proceso Electoral Federal 2017-2018; así como, (ii) no dar a conocer el resultado del cómputo de la elección de candidatos a Senadores por el principio de Representación Proporcional. En la sesión del veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional acordó reencauzar el medio de impugnación a la Comisión responsable para que resolviera a través de la queja partidista correspondiente.

...

14. Resolución impugnada. El veinticinco de marzo de dos mil dieciocho, la Comisión responsable resolvió el recurso de inconformidad intrapartidista identificado con la clave INC/NAL/199/2018, en el sentido de desechar por improcedente el recurso, al considerar que su presentación fue extemporánea y que había agotado su derecho de acción.

15. Juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano. El uno de abril de dos mil dieciocho el actor presentó ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo nuevo juicio ciudadano en contra de la Resolución mencionada en el numeral que antecede. El escrito de demanda fue remitido por el Tribunal Local, sin trámite alguno, a esta Sala Superior el tres de abril posterior.

...

CONSIDERANDO

...

SEGUNDO. Improcedencia.

El medio de impugnación que se resuelve es improcedente y, por ende, la demanda debe desecharse de plano, por haberse presentado fuera del plazo legal previsto para ello.

...

RESUELVE:

ÚNICO. Se desecha de plano la demanda.”

[Énfasis añadido]

Como se advierte de las sentencias referidas, Celestino Ábrego Escalante, promovió queja por la *supuesta omisión del PRD de publicar en su portal de Internet la lista definitiva de candidatos al Senado*, lo cual fue reencauzado por la *Sala Superior* a la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD, a fin de que determinara lo que en derecho correspondiera, lo que, a la fecha, ha acontecido en el ámbito partidario.

Es decir, Celestino Ábrego Escalante ha agotado su derecho de acción por la omisión reclamada ante las instancias del *PRD* competente para ello.

TERCERO. IMPROCEDENCIA POR INCOMPETENCIA. Atento a lo expuesto en el considerando que antecede, se advierte que, a la fecha, Celestino Ábrego Escalante tuvo acceso a la justicia partidaria por presuntas violaciones a la normativa interna del *PRD*, derivado de la omisión reclamada que es materia del presente procedimiento.

No obstante, en lo que atañe a esta autoridad electoral por el motivo de inconformidad consistente en la *supuesta omisión del PRD de publicar en su portal de Internet la lista definitiva de candidatos al Senado*, se considera que el *INE* carece de competencia para conocer del asunto, pues por cuestión de la materia, ello le corresponde al **Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)**, como se razona a continuación.

La competencia es un presupuesto procesal fundamental para que se pueda constituir y desarrollar válidamente el proceso, y su estudio es preferente y de orden público que se debe de hacer por oficio, a fin de dictar la resolución correspondiente.

Sirve de apoyo a lo anterior, las razones esenciales contenidas en la Tesis de Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,²⁴ cuyo rubro y texto son:

²⁴ 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIX, abril de 2009; Pág. 5.

“COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. La competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su **jurisdicción en determinado tipo de litigios**, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Por otra parte, de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción V y 94, párrafo sexto, constitucionales, se infiere que la competencia especializada por razón de materia de los Juzgados de Distrito está elevada a rango constitucional. En congruencia con lo anterior, se concluye que aquella competencia es un presupuesto de validez del proceso cuya infracción por los citados órganos jurisdiccionales al resolver un juicio de amparo sin tener competencia por razón de materia, se traduce en el desconocimiento de la voluntad del Constituyente y, por ende, de la del legislador que la desarrolla, lo que ocasiona que se violen las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo en perjuicio de las partes, porque se les sujeta a la determinación proveniente de una autoridad que prorroga indebidamente su competencia y resuelve un juicio específico sin tener facultades para ello, afectando directamente los derechos sustantivos de aquéllas.”

[Énfasis añadido]

En el caso concreto, se denuncia el presunto incumplimiento a la normatividad electoral por parte del partido político denunciado con motivo de la *supuesta omisión del PRD de publicar en su portal de Internet la lista definitiva de candidatos al Senado*.

Al respecto, es importante referir, en la parte que interesa, la sentencia dictada por la *Sala Superior* el veintidós de marzo del año en curso, dentro del expediente SUP-JDC-110/2018:

“34. En consecuencia al resultar **fundada** la materia de disenso hecha valer por el actor en el presente juicio, se ordena a la responsable que conforme a lo establecido en los

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/CAE/JL/HGO/79/2018

artículos 459, 464 y 465 de la LGIPE, así como los artículos 1, 10, 14 y 45 del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE, le dé trámite al escrito presentado por Celestino Ábrego Escalante como queja y lo remita a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral para que en su caso se apertura el procedimiento ordinario sancionador y de acreditarse las violaciones emita la sanción que corresponda.”

Como se advierte, el máximo órgano jurisdiccional de la materia determinó en la sentencia de mérito, remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del *INE*, el escrito original firmado por Celestino Ábrego Escalante, por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su concepto, podrían constituir infracciones a la normativa electoral; lo anterior, para que, **en su caso**, se iniciara el procedimiento sancionador correspondiente.

Es importante destacar que la *Sala Superior* al resolver el expediente SUP-JDC-110/2018, razonó que el motivo de inconformidad hecho valer por Celestino Ábrego Escalante es el que se sintetiza a continuación:

“...del análisis integral del escrito de queja se advierte que la verdadera intención del ahora actor consistía en denunciar el supuesto incumplimiento del PRD de publicar la lista definitiva de candidatas y/o candidatos al Senado de la República por los principios de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional para el Proceso Federal Electoral 2017-2018.”

Puntualizado lo que antecede, esta autoridad estima que **es incompetente** para conocer y resolver la queja formulada por Celestino Ábrego Escalante, atento a que los hechos denunciados y las normas que se estiman conculcadas, están relacionadas con las obligaciones de los partidos políticos en materia de transparencia.

En efecto, se estima que tales hechos e infracciones que se denuncian no actualizan alguno de los supuestos de competencia previstos constitucional y legalmente en favor de esta autoridad electoral nacional.

Para arribar a la anotada conclusión, se tiene en cuenta que el quejoso denunció, como ya quedó apuntado, lo siguiente:

- **La supuesta omisión del *PRD* de publicar en su portal de Internet la lista definitiva de candidatos al Senado.**

Al respecto, es menester referir que el artículo 28 de la *LGPP* establece, en lo que interesa, que el organismo autónomo garante en materia de transparencia tendrá competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública de los partidos políticos, en los términos que disponga la ley referida en el artículo 6o. constitucional.

Esto es, el derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública de los partidos políticos será salvaguardado por el *INAI*; organismo público constitucional, que conforme a lo establecido en el artículo 6o. constitucional tiene las siguientes características:

“Artículo 6o.

...

A.

...

VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, **responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública** y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.

El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, en los términos que establezca la Ley General que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.

En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales **de** cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, **partidos políticos**, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de las entidades federativas que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la ley.

El organismo garante federal, de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente de las entidades federativas, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.”

[Énfasis añadido]

Como se advierte, la federación contará con un órgano constitucional autónomo especializado en materia de transparencia, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública de los sujetos obligados, entre ellos los partidos políticos.

Esto es, el citado órgano constitucional tiene competencia para conocer sobre asuntos relacionados con el acceso a la información pública en posesión de los partidos políticos, cuyo actuar se regirá por el artículo 60 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo contenido se transcribe a continuación:

“Artículo 60. Las leyes en materia de transparencia y acceso a la información, en el orden federal y en las Entidades Federativas, establecerán la obligación de los sujetos obligados de poner a disposición de los particulares la información a que se refiere este Título en los sitios de Internet correspondientes de los sujetos obligados y a través de la Plataforma Nacional.”

Ahora bien, se considera necesario referir que en términos de lo previsto en el artículo 6 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Estado, en el orden federal a través del *INAI*, garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión de los partidos políticos.

Conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley General en comento, los partidos políticos son sujetos regulados a dar cumplimiento a las obligaciones previstas en dicha ley, entre ellas la establecida, en la fracción XI del artículo 24, consistente en que **deberán publicar y mantener actualizada la información relativa a sus obligaciones de transparencia.**

Al respecto, las fracciones II y XVII del artículo 76 de la Ley General de Transparencia prevén que, además, de las obligaciones referidas en el diverso 70 de esa Ley, **los partidos políticos deberán poner a disposición del público y actualizar la información relativa a los acuerdos y resoluciones de sus órganos de dirección**, así como el currículo con fotografía reciente de todos los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, con el cargo al que se postula, el Distrito Electoral y la entidad federativa.

Esto es, **se considera que la materia de denuncia** consistente en la *supuesta omisión del PRD de publicar en su portal de Internet la lista definitiva de candidatos al Senado*, **se encuentra prevista en la Ley General de Transparencia como una obligación de los partidos políticos.**

Se afirma lo anterior, porque la omisión que se denuncia y que se pretende atribuir al *PRD*, puede actualizar una infracción a su obligación de **publicar y mantener actualizada la información relativa a los acuerdos y resoluciones de sus órganos de dirección.**

En el caso, el acuerdo por el que se aprobó la lista definitiva de candidatos y/o candidatas al Senado de la República por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, materia de controversia, fue aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional del *PRD*, siendo este un órgano de dirección del partido político denunciado, al ser su autoridad superior en el país, lo anterior, conforme a lo establecido en los artículos 34, fracción X, y 99 del Estatuto de dicho instituto político.

Sobre esto último, en términos similares, la *LGPP*, en sus artículos 30, párrafo 1, inciso c) y 32, establece, por una parte, que se considerara información pública de los institutos políticos los acuerdos aprobados por sus órganos de dirección, relativos a la postulación de sus candidatos a cargos de elección popular y, por otra, que los mismos están obligados a mantener actualizada la información pública de forma permanente a través de sus páginas electrónicas, sin perjuicio de la periodicidad, formatos y medios que establezca para todas las obligaciones de transparencia la *LGPP* y la normatividad de la materia.

También es de tomarse en cuenta, como se desprende de las constancias allegadas al expediente durante la investigación preliminar, la Unidad Técnica del *INE* especializada en materia de transparencia, a través del oficio INE/UTyPDP/DAIPDP/024/2018,²⁵ informó a la autoridad sustanciadora del presente procedimiento, esencialmente, lo siguiente:

“ ...

[Con la reforma del artículo 6° Constitucional se] estableció la creación de los organismos garantes en materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; a nivel nacional, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales...

En el mismo artículo, se establece que el INAI tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de los órganos autónomos y partidos políticos, entre otros.

3. Leyes General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Las leyes mencionadas, prevén lo siguiente:

- Deberes de los sujetos obligados
- El artículo 24, fracción XI de la Ley General de Transparencia establece que los sujetos obligados deben publicar y mantener actualizada la información relativa a sus obligaciones de transparencia.

²⁵ Visible a páginas 125-133 del expediente.

- Plataforma Nacional de Transparencia
- El artículo 50, fracción III dispone que la Plataforma Nacional de Transparencia está conformada, entre otros, por el Sistema de portales de obligaciones de transparencia.

- Obligaciones de Transparencia
- El diverso 60, señala que las leyes en materia de transparencia y acceso a la información, en el orden federal y en las Entidades Federativas, establecerán la obligación de los sujetos obligados de poner a disposición de los particulares la información a que se refiere el Título Quinto de la Ley General, en los sitios de Internet correspondientes de los sujetos obligados y a través de la Plataforma Nacional.

4. Partidos políticos como sujetos obligados

La reforma constitucional en materia de transparencia, promulgada unos días antes de la reforma político electoral de 2014, reconoce a los partidos políticos como sujetos obligados directos, con lo que establece los mismos deberes que cualquier autoridad, entidad u organismo y sometidos al mismo régimen de cumplimiento, como ya ha quedado de manifiesto en los incisos previos.

...

I. Experiencia del Instituto Nacional Electoral como Sujeto Obligado al cumplimiento de las normas de Transparencia

Conforme a la información compartida por la Dirección de Políticas de Transparencia, área adscrita a la Unidad Técnica de Transparencia, le comento que el INAI realiza la verificación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia de manera oficiosa o derivado de una denuncia; esto quiere decir que evalúa el nivel del cumplimiento de dichas obligaciones.

Las acciones consisten en una verificación total —son virtuales— o bien, una muestra aleatoria de la información publicada en los portales de Internet de cada sujeto obligado; y en la Plataforma Nacional de Transparencia, de manera específica en el Sistema de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), a efecto de corroborar que la información cargada esté completa y actualizada; es decir, que cumpla los elementos de forma, términos, plazos y formatos previamente aprobados por el Sistema Nacional de Transparencia.”

Esto es, con motivo de la reforma promulgada el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforma y adiciona, entre otros, el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se estableció la creación de los

organismos garantes en materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; a nivel nacional, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, organismo que tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de los órganos autónomos y partidos políticos, entre otros.

Así, la conclusión a la que se arriba en la presente Resolución, es que esta autoridad electoral nacional no es la competente para conocer de la queja planteada, pues se insiste, existe un órgano autónomo establecido constitucionalmente especializado en asuntos relacionados con acceso a la información pública de los institutos políticos, sujetos regulados por la normatividad de esa materia.

En consecuencia, se estima procedente **declarar la improcedencia por incompetencia** de la presente queja, al actualizarse la causal prevista en el artículo 466, párrafo 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el numeral 46, párrafo 2, fracción IV del Reglamento de Quejas y Denuncias, consistente en que se denuncien actos de los que el *INE* resulte incompetente para conocer.

CUARTO. REMISIÓN AL INAI. Toda vez que los hechos denunciados no corresponden a algunas de las hipótesis que actualizan la competencia de esta autoridad, conforme a lo expuesto en el Considerando que antecede, lo procedente es **remidir al INAI**, el escrito original de la queja y las constancias que integran el expediente, previa copia certificada que de los mismos obre en autos, así como de la presente Resolución, a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en Derecho corresponda.

QUINTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la Constitución Federal,²⁶ se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de

²⁶ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: "**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**", y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª), Página: 2864, Rubro: "**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.**"

apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previsto en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se **declara la improcedencia por incompetencia** de la denuncia presentada por Celestino Ábrego Escalante, en términos de lo argumentado en el Considerando TERCERO.

SEGUNDO. Remítase al **Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)**, el escrito original de la queja y las constancias que integran el expediente, previa copia certificada que de los mismos obre en autos, así como de la presente Resolución, a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en Derecho corresponda; lo anterior, de conformidad con lo expuesto en el Considerando CUARTO.

TERCERO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previsto en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Notifíquese personalmente a, Celestino Ábrego Escalante.

Por **oficio**, al **Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales**.

Por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1235/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ORDINARIO
DENUNCIANTE: JORGE ITURBE AVILA
DENUNCIADO: PARTIDO NUEVA ALIANZA

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/JIA/JD11/VER/83/2018, INICIADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR JORGE ITURBE ÁVILA EN CONTRA DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA INDEBIDA AFILIACIÓN DE DICHO CIUDADANO, AL CITADO INSTITUTO POLÍTICO Y, EN SU CASO, EL USO NO AUTORIZADO DE SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 12 de septiembre de dos mil dieciocho.

G L O S A R I O

COFIPE	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Comisión	Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
DEPPP	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
DERFE	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral
INE	Instituto Nacional Electoral

<i>LGPE</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>LGPP</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>PANAL</i>	Partido Nueva Alianza
<i>Reglamento de Quejas</i>	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>Sala Superior</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>Tribunal Electoral</i>	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>UTCE</i>	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral

A N T E C E D E N T E S

I. DENUNCIA¹. El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en la *UTCE* del *INE*, el oficio *INE/JD11-VER/2286/2018*, firmado por la Licenciada Cruz del Carmen Ávila López, Vocal Ejecutiva de la 11 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, a través del cual remite el escrito de queja y sus respectivos anexos, signado por el ciudadano Jorge Iturbe Ávila, mediante el que hace del conocimiento de esta autoridad electoral, posibles indicios de que el *PANAL* lo afilió sin su consentimiento y, para ello, utilizó indebidamente sus datos personales.

II. REGISTRO, ADMISIÓN Y RESERVA DE EMPLAZAMIENTO.² El cinco de abril de dos mil dieciocho, se registró el escrito de queja con el número de expediente citado al rubro, como un procedimiento sancionador ordinario por la presunta indebida afiliación y el uso indebido de datos personales para ese fin.

Además, se admitió a trámite la queja y se reservó el emplazamiento a las partes involucradas en el procedimiento, hasta en tanto se encontrará debidamente integrado el expediente que nos ocupa, con el fin de esclarecer los hechos y pretensiones que se hacen del conocimiento de esta autoridad.

¹ Visible a páginas 1 a 6 del expediente

² Visibles a páginas 7 a 14 del expediente

III. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR. Con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, el Titular de la *UTCE* emitió proveído en el que ordenó la práctica de diversas diligencias de investigación, mismas que son debidamente reseñadas en el apartado denominado *4. HECHOS ACREDITADOS Y PRECISIONES*, las cuales se deberán tener por reproducidas como si a la letra se insertasen, a fin de evitar repeticiones innecesarias.

Asimismo, cabe señalar que dentro de la investigación implementada por la *UTCE*, el cinco de abril del año en curso, se ordenó requerir información al *PANAL* en relación a la supuesta indebida afiliación del ciudadano quejos, toda vez que fue omiso en dar cumplimiento al requerimiento de información formulado por esta autoridad; mediante Acuerdo de siete de mayo del año en curso, por lo que la *UTCE* consideró pertinente requerir de nueva cuenta al citado instituto político, para que proporcionara la información requerida, siendo omiso el partido político en ambas ocasiones.

IV. EMPLAZAMIENTO.³ El once de junio de dos mil dieciocho, se ordenó el emplazamiento al *PANAL*, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la conducta que se le imputó y aportara los medios de prueba que considerara pertinentes.

Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito.

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
PANAL INE-UT/9463/2018 ⁴ 15/06/2018	Plazo: 18 al 22 de junio de 2018.	Escrito signado por el representante propietario del <i>PANAL</i> ante el <i>Consejo General</i> , presentado el 22 de junio de 2018. ⁵

³ Visible a páginas 41-48 del expediente.

⁴ Visible a página 51 del expediente.

⁵ Visible a página 68 del expediente.

V. ALEGATOS.⁶ El tres de julio de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a las partes, a efecto de que en vía de alegatos manifestaran lo que a su derecho conviniera.

El acuerdo de vista para alegatos, se diligenció en los siguientes términos:

DENUNCIADO

Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
PANAL INE- UT/11155/2018 ⁷ 06/07/2018	Plazo: 09 de julio al 13 de julio de 2018.	Escrito signado por el representante propietario del <i>PANAL</i> ante el <i>Consejo General</i> , presentado el 13 de julio de 2018. ⁸

DENUNCIANTE

Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
Jorge Iturbe Ávila INE-VS-JLE/0739/2018 ⁹	Notificación personal: ¹⁰ 13 de julio de 2018. Plazo: 16 de mayo al 20 de julio de 2018.	No da respuesta

VI. ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, toda vez que no había diligencias pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la *Comisión*.

VII. SESIÓN DE LA COMISIÓN. En la Octogésima Cuarta Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el seis de septiembre de dos mil dieciocho, la *Comisión de Quejas* analizó y aprobó el proyecto de mérito, por unanimidad de votos de sus integrantes; y

⁶ Visible a páginas 69 a 71 del expediente.

⁷ Visible a página 76 del expediente.

⁸ Visible a página 88 del expediente.

⁹ Visible a página 88 del expediente.

¹⁰ Visible a páginas 89 a 94 del expediente.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 341, párrafo 1, inciso a) y 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*; 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *LGPP*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte del *PANAL*, en perjuicio del ciudadano Jorge Iturbe Ávila.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 442, párrafo 1, inciso a); 443 párrafo 1, incisos a) y n), y 456, párrafo 1, incisos a), de la *LGIPE*, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicha Ley, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en los artículos 2 y 25, de la *LGPP*, las cuales son sancionables por el *Consejo General*.

En consecuencia, siendo atribución del *Consejo General* conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta competente para conocer y resolver respecto de las presuntas infracciones denunciadas en el procedimiento sancionador ordinario, atribuidas al *PANAL*, derivado, esencialmente, de la indebida afiliación al citado instituto político.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,¹¹ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios

¹¹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de ciudadanos.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, incisos a) y n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIPE*, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

SEGUNDO. NORMATIVIDAD APLICABLE AL CASO

En el presente asunto se debe subrayar que la presunta violación al derecho de libertad de afiliación se cometió **durante la vigencia del COFIPE**, puesto que el registro o afiliación del ciudadano Jorge Iturbide Ávila al *PANAL*, de conformidad con las documentales que obran en el expediente vitado al rubro, se realizó el primero de agosto de dos mil trece, fecha en la cual se encontraba vigente dicho Código.¹²

Por tanto, si al momento de la comisión de las presuntas faltas se encontraba vigente el *COFIPE*, es claro que este ordenamiento legal debe aplicarse para las cuestiones sustantivas del presente procedimiento, al margen que las faltas pudieran haber sido advertidas por el quejoso y cuestionadas mediante la queja que dio origen al presente asunto, una vez que dicha norma fue abrogada por la *LGIPE*, así como que este último ordenamiento sea fundamento para cuestiones procesales o adjetivas.

¹² El *COFIPE* estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce.

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO

1. FIJACIÓN DE LA LITIS

En el presente asunto se debe determinar si el *PANAL* afilió indebidamente o no al ciudadano que alega no haber dado su consentimiento para estar en sus filas, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 341, párrafo 1, inciso a) y 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*; 443, párrafo 1, incisos a) y n) de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *LGPP*.

2. MARCO NORMATIVO

A) Constitución, tratados internacionales y ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, y las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: ...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios

que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. *Son derechos del ciudadano:*

...

III. *Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;*

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la *Constitución Federal*, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos

políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafilarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia **24/2002**, emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES**.¹³

¹³ Consultable en la página: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,¹⁴ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentra consagrado a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

¹⁴ Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/proclLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes —asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

***“Artículo 23.** Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:*

I...

***II.** Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:*

***1.** Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:*

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.”

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que, en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;

- Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
- Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGIFE*, que es obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* del *IFE* por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *H. Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su constitución y registro.

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JIA/JD11/VER/83/2018

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.
- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que, en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para

respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cuál, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha

transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna del Partido Nueva Alianza.

Derivado de lo anterior, particularmente de que la infracción presuntamente cometida por el *PANAL*, consiste precisamente en el incumplimiento de sus propias normas de afiliación, se hace necesario analizar éstas, a fin de conocer las condiciones en que fueron incorporados los ciudadanos a su padrón de afiliados.

Estatuto del *PANAL*¹⁵

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS AFILIADOS Y ALIADOS

ARTÍCULO 6.- *Nueva Alianza es una organización abierta a todos los mexicanos y mexicanas que deseen participar en la vida democrática nacional y quieran contribuir con propuestas y esfuerzo al desarrollo de México. Las mexicanas y los mexicanos podrán integrarse de manera libre, individual y pacífica a Nueva Alianza bajo dos modalidades: afiliados y aliados.*

ARTÍCULO 7.- *Se considera afiliado todo aquel ciudadano mexicano que en pleno goce de sus derechos político electorales suscriba de manera individual, libre y voluntaria, el documento formal de afiliación y cumpla con los requisitos establecidos en el presente Estatuto y el Reglamento que al efecto se emita.*

Para acreditar la calidad de afiliado, se deberá contar con la identificación debida, la cual se emitirá en los términos del presente Estatuto y permitirá la adecuada actualización del padrón de afiliados.

ARTÍCULO 9.- *Para efecto de lo dispuesto en el artículo 7, segundo párrafo, el Comité de Dirección Nacional autorizará el formato único y emitirá la identificación debida, de conformidad con lo establecido en el artículo 63,*

¹⁵ Los cuales se encontraban vigentes al momento de la afiliación de los denunciantes. Mismos que fueron aprobados el catorce de septiembre de dos mil once, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y pueden ser consultados en http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-resoluciones/2011/Septiembre/CGex201109-14_1/CGe140911rp1_x1.pdf

fracción III del presente Estatuto, previa verificación del cumplimiento de los requisitos.

En caso de que estime que no se reúnen tales requisitos, emitirá el Dictamen en el que se asienten los fundamentos y razones que justifiquen dicha determinación.

D) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

Lo anterior, se robustece con el criterio sostenido por la Sala Superior, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-141/2018, en el que determinó, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“...los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de un ciudadano pertenecer a un partido político, no puede alegar que existe uso indebido de sus datos personales porque se consideran públicos.

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban pertenecer...”

Así, de lo transcrito, se obtiene medularmente lo siguiente:

- El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, fundamentalmente, en la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para decidir libre e individualmente si desean formar parte de los partidos y agrupaciones políticas.
- Afiliado o Militante es el ciudadano que libre, voluntaria e individualmente, acude a un partido político para solicitar su incorporación al padrón de militantes respectivo, a través de los documentos aprobados por los órganos partidistas correspondientes.

- Al *PANAL* podrán afiliarse los ciudadanos que, libre e individualmente, expresen su voluntad de integrarse al Partido.
- Para obtener la afiliación al *PANAL*, se requiere, además de ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos político electorales, suscribir de manera voluntaria, individual y libre el documento de formal afiliación.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán contemplar en sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos.

E) CARGA Y ESTANDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO.

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como afiliado del *PANAL*, por regla general debe suscribir el documento formal de afiliación.

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso *PANAL*), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del *COFIPE*, precepto que, derivado de la reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la *LGPP*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que además los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos les corresponde demostrar que las personas que lo integran fue derivado de una decisión individual, libre y voluntaria.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la *Sala Superior*, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**,¹⁶ donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia 21/2013, de rubro **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,¹⁷ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria¹⁸ y como estándar probatorio.¹⁹

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

¹⁶ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

¹⁷ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.

¹⁸ Tesis de Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

¹⁹ Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. Véase la nota 35.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación²⁰ ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la *Sala Superior* consideró en la sentencia referida, que, para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la Ley

20 Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA**, **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO**.

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con fundamento en el diverso 441 de la *LGPE*, lo que implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento ordinario sancionador una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta

viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberadamente la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

4. HECHOS ACREDITADOS Y PRECISIONES

En principio, es importante considerar que la responsabilidad administrativa atribuida al infractor de una norma electoral, debe estar sustentada en dos principios que constituyen la base objetiva de todo procedimiento sancionador: por un lado, la existencia fáctica de la conducta prevista como falta en la norma; y por otro, la responsabilidad del sujeto a quien se le atribuye dicha conducta, esto es, el nexo causal que debe quedar demostrado entre la realización de la conducta infractora y la responsabilidad en su comisión por el presunto infractor.

Así, a efecto de determinar la legalidad o ilegalidad de los hechos cuestionados y la responsabilidad atribuida al partido denunciado, se verificará en principio, la

existencia de los mismos y las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se materializaron, a partir del acervo probatorio que obra en el sumario, mismo que se integra por los elementos siguientes:

- a) **Documental pública**, consistente en la impresión del correo electrónico de trece de abril de dos mil dieciocho, recibido de la cuenta institucional patricio.ballados@ine.mx, correspondiente al Director Ejecutivo de la DEPPP, mediante el cual se informó a la UTCE que el hoy quejoso se encuentra afiliado al PANAL, así como la fecha en que ello aconteció.
- b) **Documentales privadas** consistentes en los escritos firmados por el representante propietario del PANAL, mediante los cuales da respuesta al emplazamiento y vista de alegatos, formulados por esta autoridad, mediante el que informa que existe imposibilidad de satisfacer el requerimiento solicitado.

En torno a los medios de convicción citados, la documental pública indicada en el inciso a), cuenta con valor probatorio pleno, por provenir de un funcionario electoral en el ejercicio de sus atribuciones, tal como lo prevén los artículos 462, párrafo 2, de la LGIPE; y 27, párrafo 2, del *Reglamento de Quejas*, mientras que la documental privada referida en el inciso b) sólo hará prueba plena cuando, al ser valorada por este Consejo General, y concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos a que se refieren, con base en lo establecido en los artículos 462, párrafo 3, de la LGIPE; y 27, párrafo 3, del *Reglamento de Quejas*.

Así las cosas, de los medios de prueba referidos se puede colegir los siguiente:

Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
Jorge Iturbe Ávila	15 de marzo de 2018 ²¹	Afiliado 01-08-2013 ²²	Escrito, ²³ signado por el representante propietario del PANAL, por el que informó, entre otras cuestiones, que <i>después de haber enviado el requerimiento al</i>

²¹ Visible a página 3 a 6 del expediente.

²² Visible a páginas 28 a 29 del expediente.

²³ Visible a página 68 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JIA/JD11/VER/83/2018

Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
			<i>Comité de Dirección de Nueva Alianza en el Estado de Veracruz, no se recibió contestación alguna de dicho Comité, es por ello que, de nuestra parte existe imposibilidad de satisfacer el requerimiento en los términos en los que dispone.</i>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia de que el denunciante fue afiliado del <i>PANAL</i>, y que dicho ciudadano negó haberse afiliado a ese partido político y que éste no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión a la que se arriba es que se trata de una afiliación indebida.</p>			

En este sentido, a partir del contenido de los medios de prueba antes citados, de su relación con los hechos señalados por las partes y la verdad conocida, este Consejo General arriba a las siguientes conclusiones:

- Conforme a lo informado por la *DEPPP*, el hoy quejoso, Jorge Iturbe Ávila, fue afiliado al citado partido político el primero de agosto de dos mil trece.
- Derivado que la incorporación al padrón de afiliados del hoy quejoso es un hecho constatado por la *DEPPP*, el tema a debate lo constituye la legalidad o ilegalidad de dicha afiliación, lo que habrá de determinarse dependiendo de la existencia del consentimiento de su titular o de la ausencia de este.

5. CASO CONCRETO

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por el quejoso, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIFE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; esto es, **partido político**, candidato o inclusive cualquier persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

En otras palabras, si la libre afiliación a los institutos políticos es un derecho de los ciudadanos de este país desde hace varios decenios, resulta por demás evidente que las obligaciones de los partidos políticos que deriven de esta garantía -respetar la libertad de afiliación y, de ser necesario, acreditar que la incorporación a cada instituto político- no debe estar sujeta o condicionada a que éstos establezcan en sus normas internas disposiciones encaminadas a su protección, es decir, no depende, del momento en el que los partidos políticos hayan incluido en sus normas internas la obligación de que la afiliación sea voluntaria.

Ahora bien, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, la autoridad debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

En principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento que formula en contra de la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde al quejoso.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 340 del *COFIPE*, mismo que se reproduce con el diverso 441 de la *LGIPE*.

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, que la carga de la prueba corresponde al partido político, y no al ciudadano que negó haber solicitado su inclusión en el padrón de militantes del PANAL.

Como vimos, en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, está demostrado a partir de la información proporcionada por la *DEPPP* que el ciudadano **Jorge Iturbe Ávila**, se encontró, como afiliado del *PANAL*, desde el primero de agosto de dos mil trece.

Por otra parte, el *PANAL* informó que *después de haber enviado el requerimiento al Comité de Dirección de Nueva Alianza en el Estado de Veracruz, no se recibió contestación alguna de dicho Comité, es por ello que, existe imposibilidad de satisfacer el requerimiento en los términos en los que dispone.*

Bien entonces, el *PANAL*, no demuestra con medios de prueba idóneos, que la afiliación respectiva sea el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual del ciudadano **Jorge Iturbe Ávila**, en la cual, él mismo *-motu proprio-* haya expresado su consentimiento y, por ende, proporcionó sus datos personales a fin de llevar a cabo la afiliación a dicho instituto político, a pesar de las múltiples oportunidades que tuvo durante la secuela procesal, siendo que ni durante la etapa de investigación, emplazamiento o alegatos haya aportado la documentación idónea para acreditar el deseo del quejoso de ser incorporado a las filas de agremiados del denunciado.

Por el contrario, quedó sabido que el ciudadano **Jorge Iturbe Ávila**, en ningún momento otorgó su consentimiento para pertenecer al partido denunciado, siendo que dicho instituto político no demostró lo contrario, por lo que se actualiza la violación al derecho fundamental de libre afiliación garantizado desde la Constitución y la ley, según se expuso.

Ahora bien, tal y como quedó de manifiesto en el apartado del *MARCO NORMATIVO* de la presente Resolución, así como en el correspondiente a *CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO*, **la libertad de afiliación en materia político-electoral, es un derecho reconocido y así garantizado para todo ciudadano de nuestro país**, al menos desde hace varias décadas, tanto a nivel constitucional como legal, **el cual es concebido como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido político, permanecer afiliado a éste, desafiliarse e, incluso, no pertenecer a ninguno.**

Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección de datos personales e información relacionada con la vida privada de las personas, es igualmente un derecho con una trayectoria de protección por demás lejana.

En este sentido, es pertinente dejar en claro que la garantía y protección a los citados derechos, evidentemente no deriva de disposiciones reglamentarias al interior de los institutos políticos, que prevean como obligación del partido político, la conservación de los expedientes de afiliación de cada miembro, ni tampoco a partir de la emisión de los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, emitidos por el propio INE en la Resolución CG617/2012, sino que, como se vio, el derecho tutelado deviene de disposiciones de rango supremo, el cual debe ser tutelado en todo momento, y no a partir de normas internas o reglamentarias que así lo establezcan.

En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos políticos es un derecho de los ciudadanos previsto como garantía constitucional en nuestro País desde hace décadas, también lo es la obligación de los partidos políticos de preservar, y en su caso, de demostrar, en todo momento, que cualquier acto que engendre la voluntad de un ciudadano para formar parte en las filas de un instituto político, esté amparado en el o los documentos que demuestren indefectiblemente el acto previo del consentimiento, siendo ineficaz cualquier alegato en el sentido de que se encuentra imposibilitado de presentar la documentación idónea para demostrar la libre afiliación del ciudadano en comento, derivado de un requerimiento realizado al interior del propio partido político, y que este no fue atendido por sus órganos administrativos.

Lo anterior, porque, como se mencionó, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o

resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que, de manera insuperable, el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

A mayor abundamiento, toda vez que el denunciante manifestó no haber otorgado su consentimiento, que su afiliación se comprobó por la autoridad electoral competente, y que el *PANAL*, no cumplió su carga para demostrar que la afiliación sí se solicitó voluntariamente; por lo que **esta autoridad electoral considera que existe una vulneración al derecho de afiliación del quejoso y que, intrínsecamente, para la configuración de esa falta, utilizaron sin autorización sus datos personales**, lo cual, debe ser considerado por esta autoridad para la imposición de la sanción.

Es importante señalar que el *PANAL*, fue omiso al requerimiento de información para conocer si el ciudadano está actualmente afiliado o no se encuentra registrado en el Padrón de Afiliados de ese instituto político, lo cierto es que la *DEPPP* informó a esta autoridad electoral nacional que el ciudadano **Jorge Iturbe Ávila**, si apareció

registrado en el padrón de militantes del instituto político denunciado en fecha primero de agosto de dos mil trece.

No obstante, lo anterior, se considera que tal circunstancia, en modo alguno, exime de responsabilidad al *PANAL*, respecto a la conducta que se le atribuye, ya que, conforme a lo informado por la *DEPPP*, se acreditó que Jorge Iturbe Ávila, sí es afiliado del partido denunciado, sin que dicho instituto político aportara elemento de prueba para acreditar que esa afiliación aconteció conforme a su normatividad interna.

Ahora bien, cabe señalar que obra en el expediente una documental pública expedida por una autoridad en el ejercicio de sus funciones sobre el registro de afiliación de Jorge Iturbe Ávila al *PANAL* y, por otra, la manifestación del instituto político denunciado dentro de sus escritos de emplazamiento y alegatos, formulados por esta autoridad, en el sentido de que el Comité de Dirección de Nueva Alianza en el estado de Veracruz, fue omisa en remitir las constancias atinentes a la afiliación del ciudadano al instituto político denunciado, por lo cual, se considera fue de manera indebida.

Finalmente, es importante precisar que no obstante que, durante la sustanciación del presente procedimiento, se requirió información al partido político denunciado, sin que este la haya proporcionado, particularmente, como se ha establecido, la cédula de afiliación o alguna otra documentación que acreditara que la afiliación del ciudadano Jorge Iturbe Ávila, aconteció de forma libre, individual, voluntaria, personal y pacífica.

Lo anterior, al considerar que la cédula de afiliación, con firma, son un indicio de que el citado ciudadano fue afiliado al instituto político en mención por voluntad propia, circunstancia que, en el particular, no aconteció. En mérito de lo anterior, existe evidencia que hace suponer que la afiliación a la que se refiere en este apartado, fue producto de una acción ilegal por parte del *PANAL*.

No pasa inadvertido que el *PANAL* manifestó al dar contestación al emplazamiento y a la vista de alegatos formulados por la *UTCE*, que *después de haber enviado el requerimiento al Comité de Dirección de Nueva Alianza en el Estado de Veracruz, no se recibió contestación alguna de dicho Comité, es por ello que, existe imposibilidad de satisfacer el requerimiento de información.*

Al respecto, se debe señalar lo siguiente:

- Si bien, a dicho del denunciado, este requirió al Comité de Dirección de Nueva Alianza en el estado de Veracruz, a fin de que proporcionara la cédula de afiliación a nombre de **Jorge Iturbe Ávila**, ello no es suficiente para eximir de la carga procesal, por el hecho de ser omiso en presentar el citado documento.
- A mayor abundamiento, el *PANAL* contó con la oportunidad para hacer llegar la información a la autoridad electoral, toda vez, que fue requerida en dos momentos distintos (cinco de abril y siete de mayo, ambos de dos mil dieciocho); así como en el emplazamiento y vista de alegatos formulados por esta autoridad, sin embargo, como se apuntó, resulto omiso en presentar la documentación requerida.
- En ese sentido, y como se apuntó *“nadie puede invocar su propio error o negligencia en su beneficio”*, es por ello, que no es causa justificada que, derivado de una solicitud desatendida al interior del propio partido, justifique la omisión del *PANAL* ante esta autoridad electoral.

Es decir, el hecho de haber solicitado a otra instancia del mismo partido político y esta haya sido omisa en dar respuesta al requerimiento, no exime al *PANAL* de la obligación permanente que tiene de constituirse como garante de la plena e irrestricta observancia de la *Constitución*, así como de las leyes que de ella emanen, debiendo hacer un especial énfasis en aquellas previsiones que entrañen la protección a los derechos fundamentales en favor de todo gobernado, como lo es, en el caso, la de salvaguarda la garantía de protección de datos personales, de conformidad con los dispuesto en los artículos 41 constitucional, y 25, párrafo 1, inciso a), de la *Ley de Partidos*.

6. CONCLUSIÓN

Asimismo, de las constancias que obran en autos, no se advierte que el *PANAL* haya llevado de manera legal el proceso de afiliación del quejoso; lo anterior, para respetar el derecho de libre afiliación del ciudadano, toda vez que, por regla general, el *PANAL* tiene la carga de conservar, resguardar y en su caso restituir las documentales que acrediten la afiliación libre y voluntaria a su partido.

Ahora bien, ante la negativa del denunciante de haberse afiliado al *PANAL*, correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de pruebas idóneas, que la afiliación se llevó a cabo a través de los mecanismos legales para ello, en donde constara fehacientemente la libre voluntad del hoy promovente, lo que no hizo,

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JIA/JD11/VER/83/2018

siendo que el solo hecho de indicar que el Comité de Dirección de Nueva Alianza en el Estado de Veracruz no le remitió la cédula de afiliación, es insuficiente para acreditar el ejercicio libre, personal y voluntario del derecho de afiliación a dicho instituto político.

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación al *PANAL* implica, además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que pudiera haber servido de base o justificación al partido político para afiliar al ahora quejoso.

Entonces, podemos concluir que el presunto uso indebido de datos personales, tiene íntima vinculación con la indebida afiliación del ciudadano **Jorge Iturbe Ávila**, lo cual ya quedó debidamente acreditado y, como consecuencia de ello, merece la imposición de la sanción que se determinará en el apartado correspondiente.

Aunado a lo anterior, cabe referir que similar criterio fue adoptado por este máximo órgano de dirección, al dictar las resoluciones INE/CG787/2016 e INE/CG53/2017²⁴, dentro de los procedimientos sancionadores ordinarios UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y UT/SCG/Q/PRD/JL/SIN/6/2016 acumulados, y UT/SCG/Q/MECG/JD06/CHIH/4/2016, respectivamente, derivado de una falta de la misma naturaleza a la que aquí se estudia, en donde se determinó que el uso de datos personales poseía un carácter intrínseco o un elemento esencial para la configuración de una afiliación indebida.

Cabe destacar que la resolución INE/CG53/2017, fue confirmada por la Sala Superior, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-107/2017, donde se consideró que, ***conforme a las reglas de carga de la prueba, el partido político denunciado debía justificar que la quejosa fue afiliada voluntariamente, de manera que la prueba idónea que podía aportar al procedimiento para demostrar su hipótesis de inocencia, era precisamente la constancia de afiliación de la ciudadana, sin que así lo hubiera hecho.***

Por lo anterior, este órgano colegiado considera pertinente declara **fundado** el presente procedimiento, pues de las constancias que obran en el expediente se concluye que el *PANAL* infringió las disposiciones electorales tendentes a

²⁴ Aprobado en Sesión Extraordinaria del Consejo General celebrada el siete de marzo de dos mil diecisiete. Consultable en la liga de internet http://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-resoluciones/2017/03_Marzo/CGex201703-07/CGex201703-7-rp-2.1.pdf

demostrar la libre afiliación de Jorge Iturbe Ávila, quien apareció como afiliado a dicho instituto político, por no demostrar el **acto volitivo** de éste para permanecer agremiado a ese partido.

Ahora bien, más allá de la determinación de responsabilidad al partido político y la consecuente imposición de sanción, esta autoridad debe tutelar el derecho fundamental de afiliación del quejoso, es decir, estamos frente a la defensa de un derecho humano de naturaleza político-electoral, que en términos del artículo 1° de la Constitución Federal debe ser respetado, protegido y garantizado por todas las autoridades del Estado Mexicano.

En tal sentido, se tiene que la voluntad del denunciante es no pertenecer a este partido político, por lo que se debe ordenar al *PANAL* para que, en el supuesto que el quejoso continúe en su padrón de afiliados, sin mayor trámite, cancele su registro como su militante, y hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la *UTCE*, las pruebas que amparen el cumplimiento.

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017, de cinco de enero de dos mil diecisiete, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, de ser el caso, procediera a dar de baja al ciudadano, en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el *INE*, que lo vincule con un instituto político en particular.

CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de la falta denunciada, así como la responsabilidad por parte del *PANAL*, en el caso en concreto, procede ahora determinar la sanción correspondiente, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 355, párrafo 5 del *COFIPE*, como en el diverso 458, párrafo 5, de la *LGIFE*, relativo a la gravedad de la responsabilidad en que se incurra; el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; y, en su caso, la reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.

En relación con ello, el *Tribunal Electoral* ha sostenido que para individualizar la sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción electoral.

1. Calificación de la falta

A) Tipo de infracción

Partido	Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
PANAL	La infracción se cometió por una acción del partido político denunciado, que transgrede disposiciones de la <i>Constitución</i> , del <i>COFIPE</i> , la <i>LGIPE</i> y la <i>LGPP</i> , en el momento de su comisión.	La conducta fue la afiliación indebida y el uso no autorizado de los datos personales del ciudadano Jorge Iturbe Ávila por parte del <i>PANAL</i> .	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la <i>Constitución</i> ; y 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) e) y u) del <i>COFIPE</i> ; 443, párrafo 1, incisos a) y n); de la <i>LGIPE</i> , y 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la <i>LGPP</i> .

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o prohibidas.

En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el caso concreto, se acreditó que el *PANAL* incluyó en su padrón de afiliados, al ciudadano Jorge Iturbe Ávila, sin demostrar que para incorporarlo medió la voluntad de éste de inscribirse, el deseo de continuar como afiliado, violentando con ello lo establecido en los artículos 41 de la *Constitución*; 342, párrafo 1, inciso a), en relación con el diverso 38, párrafo 1, incisos a), e) y u), del *COFIPE*.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de los ciudadanos mexicanos de optar libremente en ser o no militante de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza al respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, efectivamente consintieron libremente en ser sus agremiados y permanecer como tales.

Por otra parte, como se analizó, para la indebida afiliación se usaron los datos personales del promovente sin que éste hubiese otorgado su consentimiento para ello, lo cual, constituye un elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida, que a la postre debe ser sancionado por esta autoridad.

En efecto, si bien es cierto, a partir de las constancias que obran en autos no está demostrado que los datos personales hubieran sido utilizados con un propósito diverso a la afiliación, lo es también que dicha información fue necesaria para materializar la incorporación de los datos del actor al padrón de afiliados del *PANAL*, sin que para ello mediara la voluntad del hoy denunciante, de ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción correspondiente.

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que el *PANAL* transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la normativa interna del instituto político, y que, tal infracción se cometió en detrimento de los derechos del ciudadano Jorge Iturbe Ávila, esta situación no conlleva estar en presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de afiliación al instituto político denunciado, quien incluyó en su padrón de militantes al hoy quejoso, sin demostrar el consentimiento previo para ello.

D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

- a) Modo.** En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles al *PANAL*, consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A,

fracción II; 35, fracción III y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 44, párrafo 2; 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE* y 443, párrafo 1, incisos a), e) y u); de la *LGIPE* en relación con los artículos 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e), y u) de la *LGPP*, al incluir en su padrón de afiliados al ciudadano Jorge Iturbe Ávila, sin tener la documentación soporte que acredite fehacientemente la voluntad de éste de pertenecer a las filas del instituto político en el cual se encontró incluido.

- b) Tiempo.** En el caso concreto, como se razonó en el considerando que antecede, la afiliación denunciada aconteció el primero de agosto de dos mil trece.
- c) Lugar.** Con base en las razones plasmadas en el escrito de denuncia, se deduce que la falta atribuida al *PANAL* se cometió en el **estado de Veracruz**.

E. Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Se considera que en el caso existe una conducta dolosa por parte del *PANAL* en violación a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u) del *COFIPE*.

La falta se califica como **dolosa**, por lo siguiente:

- El *PANAL* es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus constitucional de **entidad de interés público**, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la *Constitución*; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- El *PANAL* está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de los ciudadanos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25, párrafo 1, inciso a) de la *LGPP*.

- El de libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no sólo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.
- Todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.
- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a) y e), de la *LGPP*.
- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria**.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición,

en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.

- La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, es una violación de orden constitucional y legal que **requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento.**

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta se considera dolosa, porque:

- 1) El quejoso aduce que no solicitó en momento alguno su registro o incorporación como militante o afiliado al *PANAL*.
- 2) Quedó acreditado que el quejoso apareció en el padrón de militantes del *PANAL* como afiliado el primero de agosto de dos mil trece.
- 3) El partido político denunciado no demostró que la afiliación del quejoso se hubiera realizado a través de los mecanismos legales y partidarios conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y voluntaria del denunciante.
- 4) El partido denunciado no demostró ni probó que la afiliación del quejoso fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun indiciaria, para estimar que la afiliación del quejoso fue debida y apegada a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.

F. Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el *PANAL*, se cometió al afiliar indebidamente al **ciudadano Jorge Iturbe Ávila**, sin demostrar el acto volitivo de éste tanto de ingresar o permanecer inscrito en su padrón de militantes como de haber proporcionado sus datos personales para ese fin.

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en garantizar el derecho de libre afiliación y la protección de los datos personales del ciudadano

mexicano, mediante la conservación de los documentos atinentes que permitan demostrar el acto de voluntad del ciudadano quejoso de militar en el partido político denunciado, ni para el uso de sus datos personales.

2. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A. Reincidencia

Por cuanto a la **reincidencia** en que pudo haber incurrido el *PANAL*, este organismo electoral autónomo considera que **no se actualiza**.

De conformidad con el artículo 355 párrafo 6 del *COFIPE*, cuyo contenido reproduce el diverso 458, párrafo 6 de la *LGIPE*, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el mencionado Código, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, la *Sala Superior* ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);
2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
3. Que en ejercicios anteriores el infractor **haya sido sancionado por esa infracción mediante Resolución o sentencia firme**.

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el *Tribunal Electoral*, a través de la Tesis de Jurisprudencia **41/2010**, de rubro **REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.**²⁵

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con anterioridad.

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta.

En este sentido, debe precisarse que, en el presente asunto, no puede considerarse actualizado dicho supuesto por cuanto hace al *PANAL*, pues en los archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya sancionado a ese instituto político por faltas como la que se sanciona por esta vía, que se hayan dictado con anterioridad a los hechos materia de la presente denuncia.

B. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

²⁵ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010>

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación del ciudadano Jorge Iturbe Ávila al partido denunciado, pues se comprobó que el *PANAL* lo afilió, sin demostrar contar con la documentación soporte correspondiente, que medió la voluntad de su agremiado de pertenecer o estar inscrito a dicho instituto político.
- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, de optar por ser o no militante de algún partido político, y la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.
- Para materializar la indebida afiliación del denunciante, se utilizaron indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para formar el padrón de afiliados del *PANAL*.
- No existió un beneficio por parte del partido denunciado, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral.
- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso Electoral.
- No existe reincidencia por parte del *PANAL*.

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente **calificar la falta** en que incurrió el *PANAL* como de **gravedad ordinaria**, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el partido denunciado dolosamente infringió el derecho de libre

afiliación del hoy quejoso, lo que constituye una violación al derecho fundamental del ciudadano Jorge Iturbe Ávila, reconocida en la *Constitución*.

C. Sanción a imponer

Ahora bien, la mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción.

Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor entidad.²⁶

El artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIPE*, dispone el catálogo de sanciones a imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México; reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita; y en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la *Constitución* y de la *LGIPE*, con la cancelación de su registro como partido político.

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción (especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción acreditada), así como la conducta realizada por el *PANAL* se determina que debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida.

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la *LGIPE*, confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que, a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realicen una falta similar.

²⁶ Véase la tesis XXVIII/2003 de la Sala Superior, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que la *LGIPE*, determina pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, sólo establece las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

Con base en lo anterior, este *Consejo General* estima que, derivado de las circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida al *PANAL*, justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGIPE*, consistente en una **MULTA**, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto.

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender

tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la sanción a imponer.

En este orden de ideas, es pertinente hacer notar, que ha sido criterio de esta autoridad, al resolver los procedimientos UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y su acumulado, y UT/SCG/Q/MECG/JD06/CHIH/4/2016, el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis y siete de marzo de dos mil diecisiete, respectivamente —y que fue reiterado en el diverso SCG/Q/FSG/CG/33/INE/80/2014 y su acumulado SCG/Q/JAEB/JL/CHIH/37/INE/84/2014, resuelto por este órgano máximo de dirección el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, bajo la clave INE/CG401/2017—, en los que se sancionó por una indebida afiliación de un ciudadano, en cada caso, con una multa equivalente a **642 (seiscientos cuarenta y dos) días de salario mínimo²⁷ general vigente en el Distrito Federal** (ahora Ciudad de México), al momento de la comisión de la conducta, sanción que se estima debe tomarse como base para el presente asunto, si se considera que en dichos asuntos se demostró la comisión de una infracción similar a la que acontece en el caso que aquí se resuelve.

En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta causa, es claro que la individualización de la sanción aplicada con motivo de la afiliación indebida del ciudadano quejoso al partido político denunciado, en cuyo perjuicio se cometió la falta, debe ser proporcional, sin perder de vista las condiciones socioeconómicas del instituto político, y no simplemente, los hechos denunciados y acreditados en el presente procedimiento, a fin de que la sanción que se imponga resulte efectivamente proporcional sin ser excesiva.

En ese tenor, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad debe determinar su monto o cuantía, **tomando en cuenta** las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que corresponda.

²⁷ Ahora, Unidad de Medida y Actualización.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión que tiene sustento en la Tesis relevante **XXVIII/2003**,²⁸ emitida por el *Tribunal Electoral*, misma que a letra establece:

“SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.- *En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.”*

²⁸ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003>

Ahora bien, como se precisó con anterioridad se impone al *PANAL* una multa equivalente a **seiscientos cuarenta y dos Unidades de Medida y Actualización**, al *PANAL*, en virtud de que el ciudadano denunciante fue **afiliado en 2013**, a fin de adoptar la postura más favorable para los partidos políticos y reducir a la mínima expresión posible el carácter represor con que actúa el estado en los procedimientos de tipo sancionador, es que, para el cálculo de la multa correspondiente, se debe tomar en cuenta el salario mínimo vigente al momento de la afiliación y, una vez obtenido el monto deberá hacerse la conversión a Unidades de Medida y Actualización.

Al respecto, es un hecho notorio que se invoca en términos de lo establecido en el artículo 358 del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 461 de la *LGIPE*, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fija anualmente los montos respectivos, mismos que al ser relacionados con la fecha de afiliación, arroja lo siguiente:

Ciudadano quejoso	Fecha de afiliación	Multa impuesta en UMA	Salario mínimo ²⁹	SANCIÓN A IMPONER
Jorge Iturbe Ávila	01/08/2013	642	\$64.76	\$41,575.92 [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético]

Ahora bien, es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución —efectuada por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones.

Lo anterior, se robustece con lo establecido en la Jurisprudencia de la Sala Superior 10/2018, de rubro y texto:

MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA

²⁹ Consultable en la página de internet: http://www.conasami.gob.mx/pdf/tabla_salarios_minimos/2013/01_01_2013.pdf

***INFRACCIÓN.-** De la interpretación sistemática de los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transitorios segundo y tercero del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como 44, párrafo primero, inciso aa), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando en consideración el principio de legalidad que rige en los procedimientos sancionadores, se advierte que el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del ilícito.*

En esas condiciones, lo procedente es transformar la sanción que se considera idónea, expresada en salarios mínimos, a Unidades de Medida y Actualización para lo cual es necesario dividir el monto inicial (seiscientos cuarenta y dos de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México multiplicado por el salario mínimo vigente en 2013), entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, misma que equivale, para el ejercicio fiscal en curso, a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.).

De esta manera, al aplicar la fórmula mencionada, se obtiene lo siguiente:

En el presenta caso, el ciudadano fue afiliado en 2013, por lo que se debe dividir el monto inicial (seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente en 2013, multiplicado por \$64.76) equivalente a **\$41,575.92 (Cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco 76/100 M. N.)** entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, correspondiente a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.).

De lo anterior se obtiene que la sanción a imponer es una multa equivalente a **515.83 (quinientos quince punto ochenta y tres)** Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a **41,575.89 (cuarenta y un mil quinientos ochenta y cinco 89/100M.N)**

Debe precisarse que se considera que la multa impuesta al *PANAL* constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el

futuro, ya que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, se concluye que la misma resulta eficaz y proporcional.

D. El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la infracción

Se estima que la infracción cometida por parte del *PANAL*, aun cuando causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de la infracción.

E. Las condiciones socioeconómicas del infractor

Sobre este punto, es preciso señalar que conforme al Acuerdo INE/CG339/2017, emitido por este *Consejo General* el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se estableció que, entre otros, *PANAL* recibiría mensualmente en el presente ejercicio, por concepto de financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes, la siguiente cantidad:

SUJETO	Monto del financiamiento público para el sostenimiento de Actividades Ordinarias del 2018
<i>PANAL</i>	\$ 22,042,916.00

Ahora bien, según fue informado por la *DEPPP*, a través del oficio **INE/DEPPP/DE/DPPF/5693/2018**, el monto de la ministración mensual correspondiente al mes de septiembre de dos mil dieciocho, debía ser ajustado en función de las sanciones administrativas pendientes de cubrir por dicho instituto político nacional, por lo cual la cifra total a recibir sería la siguiente:

SUJETO	IMPORTE DE LA MINISTRACIÓN DE SEPTIEMBRE DE 2018	IMPORTE TOTAL DE LAS SANCIONES SEPTIEMBRE 2018	IMPORTE DEL REINTEGRO DEL FINANCIAMIENTO LOCAL PARA GASTOS DE CAMPAÑA	IMPORTE NETO DE LA MINISTRACIÓN
<i>PANAL</i>	\$22,042,916.00	\$3,978,653.91	\$0.41	\$18,359,332.27

F. Impacto en las actividades del sujeto infractor

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta al *PANAL*, no es de carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida, respecto al monto del financiamiento que recibirá por concepto de actividades ordinarias permanentes en el mes de septiembre del año en curso, los siguientes porcentajes:

Año	Monto de la sanción	Ciudadano	% de la ministración mensual³⁰
2013	\$41,575.89	Jorge Iturbe Ávila	0.23%

Por consiguiente, la sanción impuesta al *PANAL* no es de carácter gravoso, si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual correspondiente al mes de septiembre de este año.

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción cometida por el *PANAL* (especialmente los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con el financiamiento que recibe del *INE* para el mes de septiembre de dos mil dieciocho, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político sancionado.

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el partido político de mérito —tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagar sin que ello afecte sus operaciones ordinarias, además de que las sanciones son proporcionales a la falta cometida y se estima que, sin resultar excesiva ni ruinosa, pueden generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha

³⁰ Elevado al segundo decimal

establecido la *Sala Superior* en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-250/2009³¹, es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

QUINTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DEL QUEJOSO COMO MILITANTE

Con la finalidad de lograr el respeto a su derecho de libre afiliación, lo procedente es ordenar al instituto político denunciado que, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución**, en el supuesto que el quejoso continúe en su padrón de afiliados, **sin mayor trámite**, cancele el registro como su militante, con efectos, a partir de la fecha en que presentó su escrito de denuncia, y hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, las pruebas que amparen el cumplimiento.

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017, de cinco de enero de dos mil diecisiete, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el *INE*, que lo vincule con un instituto político en particular.

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la *Constitución*,³² se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el numeral 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

³¹ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm>

³² Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: **"TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL"**, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: **"TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL."**

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara **fundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra del **Partido Nueva Alianza**, al infringir las disposiciones electorales de libre afiliación de Jorge Iturbe Ávila, en términos de lo establecido en el numeral 5 del Considerando TERCERO de esta Resolución.

SEGUNDO. En términos del Considerando CUARTO de la presente Resolución, se impone al **Partido Nueva Alianza**, una **multa** por la indebida afiliación del ciudadano de referencia, consistente en **515** (quinientos quince) Unidades de Medida y Actualización, equivalente a **\$41,575.89** (cuarenta y un mil quinientos ochenta y cinco 89/100M.N) [Ciudadano afiliado en 2013]

TERCERO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el monto de la multa impuesta al **Partido Nueva Alianza**, será deducido de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su Considerando CUARTO.

CUARTO. Ante lo fundado del procedimiento en que se actúa, se ordena al Partido Nueva Alianza para que, de ser el caso que el quejoso continúe en su padrón de afiliados, sin mayor trámite, cancele su registro como su militante, dentro de las **veinticuatro horas** siguientes a la notificación de la presente Resolución, con efectos, a partir de la fecha en que presentó su escrito de denuncia, y hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, las pruebas que amparen el cumplimiento, a fin de vigilar y corroborar el cumplimiento por parte del referido ente político.

QUINTO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Notifíquese personalmente a las partes en el presente asunto.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1236/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO

EXPEDIENTE:

UT/SCG/Q/MAZM/JL/OAX/89/2018

DENUNCIANTE: MARÍA DE LOS ÁNGELES
ZAVALETA MARTÍNEZ

DENUNCIADO: PARTIDO VERDE ECOLOGISTA
DE MÉXICO

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/MAZM/JL/OAX/89/2018 QUE SE DERIVA DE LA QUEJA PRESENTADA POR MARÍA DE LOS ÁNGELES ZAVALETA MARTÍNEZ, QUIEN PRESENTÓ ESCRITO POR EL CUAL HIZO DEL CONOCIMIENTO DE ESTA AUTORIDAD HECHOS PRESUNTAMENTE CONTRAVENTORES DE LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, RELACIONADOS CON LA AFILIACIÓN DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO SIN SU CONSENTIMIENTO, PARA LO CUAL, EN SU CASO, SE UTILIZARON SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 12 de septiembre de dos mil dieciocho.

GLOSARIO	
<i>Consejo General</i>	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
<i>Constitución</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<i>DEPPP</i>	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
<i>DERFE</i>	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral
<i>INE</i>	Instituto Nacional Electoral

GLOSARIO	
<i>LGIPE</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>LGPP</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>PVEM</i>	Partido Verde Ecologista de México
<i>Sala Superior</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>Tribunal Electoral</i>	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

ANTECEDENTE

Como se refirió anteriormente, el presente procedimiento deriva de la queja presentada por María de los Ángeles Zavaleta Martínez, quien hizo del conocimiento de esta autoridad hechos presuntamente contraventores de la normatividad electoral, consistentes en la presunta afiliación indebida de la quejosa, porque no medió consentimiento para ello ni para el uso de sus datos personales, conducta que se atribuye al *PVEM*.

Nombre del quejoso	Fecha escrito de queja
María de los Ángeles Zavaleta Martínez	21 de marzo de 2018

RESULTANDO

I. Registro, admisión y reserva de emplazamiento. El cinco de abril de dos mil dieciocho, el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral instruyó el registro del procedimiento sancionador ordinario, al cual se le asignó la clave **UT/SCG/Q/MAZM/JL/OAX/89/2018**, por la presunta afiliación indebida y el uso indebido de datos personales por parte del *PVEM*.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MAZM/JL/OAX/89/2018

En el acuerdo en cita, se admitió a trámite el procedimiento de sanción señalado con anterioridad y se reservó lo relativo al emplazamiento de las partes; asimismo, se ordenó la realización de diversas diligencias de investigación.

Finalmente, se ordenó la notificación de dicho acuerdo de admisión al *PVEM*, así como a la ciudadana denunciante.

II. Diligencia de investigación. Con el objeto de proveer lo conducente y para la debida integración del presente asunto, la autoridad instructora determinó requerir a los sujetos que se indican a continuación:

Acuerdo de 05 de abril de 2018 ¹		
Sujeto	Oficio-Fecha de notificación	Oficio-Fecha de respuesta
<i>PVEM</i>	INE-UT/4320/2018 ² 10 de abril de 2018	PVEM-INE-211/2018 ³ 12 de abril de 2018
<i>DEPPP</i>	INE-UT/4321/2018 ⁴ 10 de abril de 2018	Atención al turno DEPPP-2018-4448 Correo electrónico de 13 de abril de 2018 ⁵

III. Requerimientos de información a María de los Ángeles Zavaleta Martínez.⁶

El cinco y veinticinco de abril de dos mil dieciocho, se ordenó requerir a la quejosa a efecto de que precisara diversa información respecto a la afiliación indebida que denunció, llevándose a cabo la diligencia de mérito en los siguientes términos:

Acuerdo de 05 de abril de 2018 ⁷		
Sujeto-Oficio	Fecha de notificación	Plazo - respuesta
María de los Ángeles Zavaleta Martínez INE-OAX/JL/VS/0513/2018 ⁸	Citatorio: 18 de abril de 2018 Cédula: 19 de abril de 2018	Del 20 al 24 de abril de 2018 Omisa en dar respuesta

¹ Visible a páginas 05-12 del expediente.

² Visible a página 19 del expediente.

³ Visible a página 23 del expediente.

⁴ Visible a página 22 del expediente.

⁵ Visible a páginas 24-25 del expediente.

⁶ Visible a páginas 45-48 del expediente.

⁷ Visible a páginas 05-12 del expediente.

⁸ Visible a páginas 57 y 61 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MAZM/JL/OAX/89/2018

Acuerdo de 25 de abril de 2018 ⁹		
Sujeto-Oficio	Fecha de notificación	Plazo - respuesta
María de los Ángeles Zavaleta Martínez INE-OAX/JL/VS/0582/2018 ¹⁰	Cédula: 03 de mayo de 2018	Del 04 al 08 de mayo de 2018 Omisa en dar respuesta

IV. Inicio de nueva investigación.¹¹ El once de junio del año de la presente anualidad, derivado de las constancias que obran en autos, se ordenó abrir un cuaderno de antecedentes a efecto de investigar el origen y razón de la página de Internet: <https://www.sarp.com.mx/INE.aspx> en la que se encontraron datos como nombre y clave de elector de la ciudadana María de los Ángeles Zavaleta Martínez.

V. Requerimiento de información al Titular de la DEPPP.¹² El dieciocho de junio del año en curso, se ordenó requerir de nueva cuenta a la DEPPP, a efecto de que proporcionara información, respecto a la afiliación de María de los Ángeles Zavaleta Martínez, siendo notificado en los términos siguientes:

Acuerdo de 18 de junio de 2018 ¹³		
Sujeto	Oficio-Fecha de notificación	Respuesta
DEPPP	INE-UT/10129/2018 ¹⁴ 22 de junio de 2018	Atención al turno DEPPP-2018-8488 Correo electrónico de 26 de junio de 2018 ¹⁵

VI. Nuevo requerimiento de información al Titular de la DEPPP.¹⁶ El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, se ordenó requerir nuevamente a la DEPPP, con el propósito de que precisara datos concernientes a la fecha de afiliación de María de los Ángeles Zavaleta Martínez al Partido Verde Ecologista de México, entre otros, siendo notificado de acuerdo a lo siguiente:

Acuerdo de 26 de junio de 2018 ¹⁷		
Sujeto	Oficio-Fecha de notificación	Respuesta y anexos
DEPPP	INE-UT/10971/2018 ¹⁸	Atención al turno DEPPP-2018-8947

⁹ Visible a páginas 45-48 del expediente.

¹⁰ Visible a páginas 57 y 61 del expediente.

¹¹ Visible a páginas 64-66 del expediente.

¹² Visible a páginas 71-73 del expediente.

¹³ Visible a páginas 71-73 del expediente.

¹⁴ Visible a página 77 del expediente.

¹⁵ Visible a páginas 78-79 del expediente.

¹⁶ Visible a páginas 80-83 del expediente.

¹⁷ Visible a páginas 71-73 del expediente.

¹⁸ Visible a página 87 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MAZM/JL/OAX/89/2018

Acuerdo de 26 de junio de 2018 ¹⁷		
Sujeto	Oficio-Fecha de notificación	Respuesta y anexos
	03 de julio de 2018	Correo electrónico de 05 de julio de 2018 ¹⁹

VII. Emplazamiento.²⁰ El trece de julio de dos mil dieciocho, se ordenó el emplazamiento al *PVEM*, para efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la conducta que se le imputó y aportara los medios de prueba que considerara pertinentes.

Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito. El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

Acuerdo de 13 de julio de 2018 ²¹		
Sujeto-Oficio	Notificación-Plazo	Oficio-Fecha de respuesta
<i>PVEM</i> INE-UT/11710/2018 ²²	Citatorio: 18 de julio de 2018. ²³ Cédula: 19 de julio de 2018. ²⁴ Plazo: 20 al 26 de julio de 2018.	Sin número de oficio ²⁵ 26 de julio de 2018

VIII. Alegatos.²⁶ El treinta de julio de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a las partes, a efecto de que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera.

El acuerdo de vista para alegatos, se diligenció en los siguientes términos:

Denunciado

Sujeto-Oficio	Notificación-Plazo	Oficio-Fecha de respuesta
<i>PVEM</i> INE-UT/12155/2018 ²⁷	Citatorio: 02 de agosto de 2018. ²⁸ Cédula: 03 de agosto de 2018. ²⁹ Plazo: 06 al 10 de agosto de 2018.	Sin número de oficio ³⁰ 10 de agosto de 2018

¹⁹ Visible a páginas 88-89 y anexos del 90 al 99 del expediente.

²⁰ Visible a páginas 100-104 del expediente.

²¹ Visible a páginas 100-104 del expediente.

²² Visible a página 109 del expediente.

²³ Visible a páginas 110-113 del expediente.

²⁴ Visible a páginas 113-114 del expediente.

²⁵ Visible a páginas 118-134 del expediente.

²⁶ Visible a páginas 135-137 del expediente.

²⁷ Visible a página 144 del expediente.

²⁸ Visible a páginas 144-146 del expediente.

²⁹ Visible a páginas 147-148 del expediente.

³⁰ Visible a páginas 157-176 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MAZM/JL/OAX/89/2018

Denunciante

Sujeto-Oficio	Notificación-Plazo	Oficio-Fecha de respuesta
María de los Ángeles Zavaleta Martínez INE/OAX/JL/VS/1179/2018 ³¹	Cédula: 03 de agosto de 2018. ³² Plazo: 06 al 10 de agosto de 2018.	Sin respuesta

IX. Elaboración de proyecto. En su oportunidad, toda vez que no había diligencias pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la Comisión de Quejas y Denuncias.

X. Sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias. En la Octogésima Cuarta Sesión Extraordinaria urgente de carácter privado, celebrada el seis de septiembre de dos mil dieciocho, la Comisión de Quejas, aprobó el proyecto por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, presentes en la sesión.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión de Quejas y Denuncias, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos

³¹ Visible a página 153 del expediente.

³² Visible a páginas 154-155 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MAZM/JL/OAX/89/2018

a), e), q), t) y u) de la *LGPP*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte del *PVEM*, en perjuicio de María de los Ángeles Zavaleta Martínez.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 442, párrafo 1, inciso a); 443 párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la *LGIPE* y 25 de la *LGPP*, respectivamente, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas, las cuales son sancionables por el *Consejo General*.

En consecuencia, siendo atribución del *Consejo General* conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta competente para conocer y resolver respecto de las presuntas infracciones denunciadas en el procedimiento sancionador ordinario, atribuidas al *PVEM*, derivado, esencialmente, de la afiliación indebida al citado instituto político.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,³³ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de ciudadanos.

³³ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIFE*, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

SEGUNDO. ESTUDIO DE FONDO

1. LITIS

En el presente asunto se debe determinar si el **PVEM** afilió indebidamente o no a **María de los Ángeles Zavaleta Martínez** que alega no haber dado su consentimiento para estar en sus filas, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5; 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIFE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*.

2. MARCO NORMATIVO

A) Constitución, tratados internacionales y ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

“Artículo 6

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

...

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

...

Artículo 41.

...

I. ...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.”

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues

sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la *Constitución*, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 de la *Constitución*— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 24/2002, emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES**.³⁴

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,³⁵ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

³⁴ Consultable en la página del *Tribunal Electoral* o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

³⁵ Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes —asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la

legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

“Artículo 23. Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:

I...

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:

- a.** En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y
- b.** El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.”

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales publicada el treinta de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, inciso a) que era un requisito para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que, en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;
- Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
- Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo Código, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGPE*, que es obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete emitió el Acuerdo del *Consejo General* identificado con la clave INE/CG85/2017, por el que se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro.

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil diecisiete, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su constitución y registro.

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.

- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que, en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las

etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la *Constitución* y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los documentos necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular,

hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna del *PVEM*

A efecto de tener claridad acerca del proceso que un ciudadano debe llevar a cabo para convertirse en militante del partido político ahora denunciado, se hace necesario analizar la norma interna del partido político, para lo cual, enseguida se transcribe la parte conducente de los Estatutos del *PVEM* consiste precisamente en el incumplimiento de sus propias normas de afiliación.³⁶

“Artículo 2.- El Partido Verde Ecologista de México, está abierto para todos los mexicanos que se interesen, respeten y acepten la Declaración de Principios, el Programa de Acción, y los Estatutos del Partido, que colaboren en la defensa y protección del medio ambiente y coincidan con el principio básico de la democracia en el respeto de la decisión de la mayoría.

Los mexicanos que así lo decidan podrán afiliarse libre e individualmente al instituto político de conformidad con las siguientes modalidades:

- I.-** Militante, ciudadanos que se valoran como el principal activo del Partido Verde Ecologista de México; con el compromiso y la participación en la toma de decisiones, que contribuyen a definir el proyecto verde ecologista mexicano;
- II.-** Adherente, los mexicanos que contribuyen con el Partido Verde Ecologista de México para la realización de sus fines y objetivos mediante aportaciones intelectuales y de propaganda; y
- III.-** Simpatizante, los mexicanos que mantienen una voluntad activa de colaboración y se inscriben voluntariamente en un registro del correspondiente ámbito territorial; para recibir información de actividades, reuniones y participación en programas.

La afiliación al Partido Verde Ecologista de México, es individual, personal, intransferible, libre y pacífica. En tal virtud y por tratarse de un Partido Político Nacional, en el cual sus afiliados; militantes, simpatizantes y adherentes participan en forma

³⁶ Consultable en la página de internet del Partido Verde, o bien en la dirección electrónica: <http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEPPP/DEPPP-DocumentosBasicos/DEPPP-DocumentosBasicos-pdfs/PVEM/ESTATUTOSPVE.pdf>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MAZM/JL/OAX/89/2018

personal y voluntaria, en el ejercicio de las actividades políticas que se encuentran consideradas en el Artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como prerrogativas de los ciudadanos, la simple afiliación a este Instituto Político de ninguna manera podrá generar derechos laborales.

Artículo 3.- Para ser militante del Partido Verde Ecologista de México, es necesario ser ciudadano mexicano con el compromiso de lograr una sociedad más justa, solidaria e igualitaria, a través de la participación de las ideas y del trabajo, que definan y configuren el proyecto político verde ecologista mexicano de transformación y búsqueda de una sociedad mejor y de una sana relación del hombre con su entorno natural.

Los militantes del Partido Verde Ecologista de México son aquellos ciudadanos que están en pleno ejercicio de sus derechos políticos y estatutarios y acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- I.-** Estar registrado en el padrón de adherentes por un plazo no menor a dos años plenamente acreditados conforme al capítulo de afiliación de los presentes Estatutos. En los casos de haber sido dirigente, candidato o haber ocupado un cargo de elección popular postulado por otro instituto político, el plazo a cumplir no podrá ser inferior a por lo menos tres años a partir de su registro como adherente;
- II.-** Adquirir el compromiso de participar en forma permanente y disciplinada en la realización de los objetivos del Partido;
- III.-** Una vez cumplidos los requisitos anteriores y apoyado por un militante, solicitar por escrito su cambio de carácter al Comité Ejecutivo Estatal correspondiente, quien turnará dicha solicitud al Consejo Político Nacional para su aprobación, quien en su caso registrará su inclusión en el padrón nacional de militantes.

Los objetivos y actividades de los militantes, tienen como meta fundamental: forjar una sólida relación de identificación, de confianza y de credibilidad, con el electorado para hacer efectiva la alternativa de gobierno.

La calidad de militante solo puede ser restringida por incurrir en alguno de los supuestos previstos por el artículo 9, y en los capítulos XI y XII de este cuerpo normativo, previa Resolución dictada por la Comisión Nacional de Honor y Justicia o en su caso por la Comisión Estatal de Honor y Justicia las cuales deberán otorgar la garantía de audiencia y cubrir todas las formalidades establecidas en los presentes Estatutos.

...

Artículo 6.- Podrán afiliarse al Partido las personas que estén ejerciendo algún puesto de elección popular postulados por otro Partido político, ya sea en el ámbito federal, Estatal o municipal, según sea el caso, solamente con el carácter de adherente,

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MAZM/JL/OAX/89/2018

solicitando por escrito su afiliación al Comité Ejecutivo Estatal de su ámbito territorial, siempre y cuando presente renuncia por escrito al Partido que lo postuló. En el entendido, que la persona que se encuentre en este supuesto, solamente podrá tener el carácter de militante si reúne lo señalado en los presentes Estatutos.

...

Artículo 69.- Facultades del Comité Ejecutivo Estatal y del Distrito Federal, en cada una de las entidades federativas:

Estará coordinado por el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal, quien será electo por el Consejo Político Estatal de entre uno de sus integrantes.

I.- Administrar los padrones Estatales de adherentes y simpatizantes respectivamente, en la entidad federativa correspondiente;

II.- Registrar a los afiliados que tengan el carácter de adherentes y simpatizantes en el padrón Estatal que corresponda;

...

CAPÍTULO XVIII
Del Registro de Afiliación

Artículo 87.- El presente capítulo tiene como finalidad regular los procesos de afiliación y participación de los militantes, adherentes y simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México a nivel nacional, Estatal, municipal y delegacional.

Artículo 88.- El proceso de afiliación es responsabilidad del Consejo Político Nacional, que tiene la obligación de llevarlo a cabo con apego a la normatividad respectiva.

Artículo 89.- La administración del proceso de afiliación en materia de captura y expedición de constancias se delegará parcialmente a los Comités Ejecutivos Estatales y del Distrito Federal.

El formato para la credencial de militante y constancia de adherente será único a nivel nacional y será determinado por el Comité Ejecutivo Nacional.

La credencial de militante tendrá una vigencia máxima de doce meses y deberá refrendarse en todos los casos a más tardar en el mes de febrero de cada año, ante el Comité Ejecutivo Estatal correspondiente con la aprobación del Consejo Político Nacional. El procedimiento de refrendo de credenciales estará condicionado a que el militante se encuentre al corriente en el pago de sus cuotas de aportación.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MAZM/JL/OAX/89/2018

Las credenciales de militante contendrán sin excepción la firma autógrafa del Secretario Técnico y del Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo Nacional, previa aprobación de la emisión por el Consejo Político Nacional.

Artículo 90.- El Consejo Político Nacional tomará las medidas pertinentes, para garantizar la adecuada prestación del servicio de afiliación e implementará los mecanismos expeditos para el adecuado desarrollo del proceso.

Artículo 91.- De la afiliación de los Militantes;

Se consideran militantes del Partido los ciudadanos que cumpliendo con lo establecido por el artículo 3 de los presentes Estatutos, hayan obtenido ese carácter de acuerdo a las disposiciones de este capítulo.

Artículo 92.- Para solicitar la credencial como militante, el interesado deberá cumplir la totalidad de los siguientes requisitos:

- I.-** Tener el carácter de adherente con al menos dos años de antigüedad al día de la solicitud, si es que no ha sido dirigente, candidato o haya ocupado un cargo de elección popular postulado por otro Instituto Político, en el caso de que no se cumpliera lo anterior, el plazo no podrá ser inferior a cuatro años a partir de su registro como adherente;
- II.-** Presentarse personalmente ante el Comité Ejecutivo Estatal y entregar la solicitud correspondiente; y
- III.-** Haber participado en alguna de las actividades cívico políticas organizadas por los órganos competentes del Partido.

Artículo 93.- El Comité Ejecutivo Estatal que reciba la solicitud de afiliación como militante, entregará al interesado el comprobante correspondiente que será la garantía de su trámite, procediendo a estudiar la solicitud, y en su caso enviarla al Consejo Político Nacional, para su dictaminación.

Artículo 94.- El Consejo Político Nacional podrá rechazar cualquier trámite de afiliación como militante, cuando éste implique manipulación interesada, o sea producto de presión, compromiso hacia terceros o promesa de beneficio personal, así como cuando el interesado haya incurrido en cualquiera de los supuestos contenidos en el capítulo XI, De las Sanciones, de los presentes Estatutos.

Artículo 95.- El Comité Ejecutivo Estatal correspondiente rechazará las solicitudes cuando:

- I.-** El solicitante no reúna los requisitos establecidos en los Estatutos; o

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MAZM/JL/OAX/89/2018

II.- Demuestre que el solicitante ha incurrido en actos de indisciplina o conductas contrarias a los principios del Partido durante el tiempo de su adherencia.

Artículo 96.- El Consejo Político Nacional como órgano superior en materia de afiliación, podrá revocar las propuestas de los Comités Ejecutivos Estatales, por incumplimiento a lo señalado en los presentes Estatutos.

...

Artículo 103.- Todos los adherentes tendrán una constancia que acredite su afiliación al Partido.

La constancia de adherente será expedida por el Comité Ejecutivo Estatal, previo acuerdo en sesión del propio Comité.

Artículo 104 bis. - De conformidad con lo previsto por el artículo 7, Base segunda fracciones III y XIII, de los presentes Estatutos, todos los militantes deberán ratificar su militancia en el proceso que para tal efecto convocará en todo el país el Consejo Político Nacional, lo anterior en el entendido de que de no hacerlo dejarán de tener la calidad de militantes y se les considerará como inicio en la etapa de adherentes. Para poder participar en el proceso de ratificación de militancia se deberá estar al corriente en el pago de las cuotas de militante.”

De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente:

- El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, fundamentalmente, en la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para decidir **libre e individualmente** si desean formar parte de los partidos y agrupaciones políticas.
- Afiliado o militante es el ciudadano que libre, voluntaria e individualmente, acude a un partido político para solicitar su incorporación al padrón de militantes respectivo, a través de los documentos aprobados por los órganos partidistas correspondientes.
- Al *PVEM* podrán afiliarse los ciudadanos que, libre e individualmente, expresen su voluntad de integrarse al partido.
- Uno de los requisitos formales para afiliarse al *PVEM*, consiste en presentar una solicitud de afiliación por escrito, a la instancia partidista correspondiente.

- Para obtener la afiliación al partido de referencia, se requiere, además de ser ciudadano mexicano y expresar **su voluntad libre, individual y pacífica de afiliarse** al Partido, **suscribir personalmente** la solicitud de alta como militante.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- En términos de lo previsto en el artículo 16, párrafo segundo de la *Constitución*, toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán contemplar en sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos.

D) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la *Constitución*, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

3. CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE AFILIACIÓN INDEBIDA A UN PARTIDO POLÍTICO

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante del **PVEM**, por regla general debe acudir a las instancias partidistas

competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso *del PVEM*), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25, párrafo 1, inciso c), de la *LGPP*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que además los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la

obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y voluntaria.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la *Sala Superior*, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**,³⁷ donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia 21/2013, de rubro **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS**

³⁷ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

SANCIONADORES ELECTORALES,³⁸ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria³⁹ y como estándar probatorio.⁴⁰

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación⁴¹ ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la *Sala Superior* consideró en la sentencia referida, que, para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

³⁸. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.

³⁹ Tesis de Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

⁴⁰ Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. Véase la nota 35.

⁴¹ Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA**, **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO**.

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con fundamento en el diverso 441 de la *LG/PE*, lo que implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento ordinario sancionador una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberadamente la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

4. HECHOS ACREDITADOS Y PRECISIONES

Como se ha mencionado, la denuncia presentada por la quejosa, versa sobre la supuesta violación a su derecho de libertad de afiliación, al ser incorporada al padrón del *PVEM*, sin su consentimiento, así como la utilización de sus datos personales por dicho partido político para sustentar tal afiliación.

Ahora bien, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de la infracción denunciada, en el siguiente cuadro se resumirá la información derivada de la investigación preliminar implementada, así como las conclusiones que fueron advertidas:

Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
María de los Ángeles	21/03/2018 ⁴²	Registro de afiliación 21/05/2016 ⁴⁴	PVEM-INE-211/2018 ⁴⁶ No es su afiliada

⁴² Visible a página 2 del expediente.

⁴⁴ Correo electrónico de 05 de julio de 2018, visible a páginas 88-89 del expediente.

⁴⁶ Visible a página 23 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MAZM/JL/OAX/89/2018

Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
Zavaleta Martínez	Anexó impresión de captura de pantalla de la https://www.sarp.com.mx/INE.aspx ⁴³	Anexó copia certificada de oficio INE/DEPPP/DE/DEPPF/1212/2017 ⁴⁵ , mediante el cual se le dio vista al PVEM a fin de que se pronunciara sobre la afiliación de la quejosa.	
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante está registrada en el PVEM. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es importante destacar que la DEPPP, en un primer momento, informó que, de la revisión a los padrones de los Partidos Políticos Nacionales con corte al 31 de marzo de 2017, <u>no encontró registro válido de María de los Ángeles Zavaleta Martínez en el padrón de afiliados del PVEM.</u>⁴⁷</p> <p>No obstante, lo anterior obedeció a que la ciudadana María de los Ángeles Zavaleta Martínez, al haber sido registrada por otros partidos políticos distintos al PVEM, apareció como registro “Duplicados en dos o más PPN”.</p> <p>En consecuencia, la DEPPP dio vista a los institutos políticos involucrados en el registro de afiliación de María de los Ángeles Zavaleta Martínez, entre ellos al PVEM, para que presentara el formato con firma autógrafa mediante el cual la ciudadana manifestó su deseo de continuar como su afiliada, sin que dicho partido acreditara que la denunciante hubiera solicitado su afiliación al partido denunciado, razón por la cual no fue contabilizada como registro válido.</p> <p>Sin embargo, se debe precisar que, conforme a lo informado por la DEPPP, el PVEM sí llevó a cabo un registro de afiliación de María de los Ángeles Zavaleta Martínez, en el Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos, haciendo uso, para ello, de sus datos personales.</p> <p>Esto es, independientemente de que, se considere como un registro de militante válido o no del PVEM, lo cierto es que dicho instituto político llevó a cabo el registro preliminar de la ciudadana quejosa como su afiliada.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>			

Por lo que hace a las constancias aportadas por la DEPPP, al ser documentos emitidos por autoridades dentro del ámbito de sus facultades, se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE, mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la LGIPE y 27, párrafo 2 del Reglamento citado;

⁴³ Visible a página 4 del expediente.

⁴⁵ Visible a páginas 93-95 del expediente.

⁴⁷ Correo electrónico de 13 de abril de 2018. Visible a páginas 24-25 del expediente.

por tanto, tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

En el mismo tenor, la documental allegada al expediente por la denunciante, constituye documental privada, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracción II del Reglamento de Quejas y Denuncias del *INE*; por lo que, por sí misma, carece de valor probatorio pleno, y sólo alcanzará ese grado cuando, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, generen convicción en este *Consejo General* sobre la veracidad de los hechos a que se refieren, ello al tenor de lo preceptuado en los artículos 462, párrafo 3 de la *LGIPE*, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención.

5. CASO CONCRETO

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por María de los Ángeles Zavaleta Martínez, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; esto es, partido político, candidato o inclusive cualquier persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

Ahora bien, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, la autoridad debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

En principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento que formula en contra de la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde al quejoso.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 de la *LGIPE*.

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que contaba con el consentimiento de los quejosos para afiliarlos a su partido político, y no a los ciudadanos que negaron haber solicitado su inclusión en el padrón de militantes del PVEM.

Así, como vimos, en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, está demostrado a partir de la información proporcionada por la *DEPPP* que María de los Ángeles Zavaleta Martínez se encontró, en ese momento, registrada como afiliada del *PVEM*.

Por otra parte, el *PVEM* no demuestra con medios de prueba, que el registro de afiliación respectiva sea el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de la ciudadana, en la cual, ella misma, *motu proprio*, expresó su consentimiento y, por ende, proporcionó sus datos personales a fin de llevar a cabo la afiliación a dicho instituto político.

Debiendo precisar que la carga de la prueba corresponde al *PVEM*, en tanto que el dicho de la actora consiste en demostrar que no dio su consentimiento para ser afiliada, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba; por lo que, la defensa del partido político consiste básicamente en afirmar que, si cumplieron las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación tienen el deber de probar esa situación.

Ahora bien, tal y como quedó de manifiesto en el apartado del *MARCO NORMATIVO* de la presente Resolución, así como en el correspondiente a *CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE AFILIACIÓN INDEBIDA A UN PARTIDO POLÍTICO*, la libertad de afiliación en materia político-electoral, es un derecho reconocido y así garantizado para todo ciudadano de nuestro país, al menos desde hace varias décadas, tanto a nivel constitucional como legal, el cual es concebido como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido político, permanecer afiliado a éste, desafiliarse e, incluso, no pertenecer a ninguno. Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección de datos personales e información relacionada con la vida privada de las personas, es igualmente un derecho con una trayectoria de protección por demás lejana.

En este sentido, es pertinente dejar en claro que la garantía y protección a los citados derechos, evidentemente no deriva de disposiciones reglamentarias al interior de los institutos políticos, que prevean como obligación del partido político, la conservación de los expedientes de afiliación de cada miembro, ni tampoco a

partir de la emisión de los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, emitidos por el propio INE en la resolución INE/CG85/2017, sino que, como se vio, el derecho tutelado deviene de disposiciones de rango supremo, el cual debe ser tutelado en todo momento, y no a partir de normas internas o reglamentarias que así lo establezcan.

En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos políticos es un derecho de los ciudadanos previsto como garantía constitucional en nuestro país desde hace décadas, también lo es la obligación de los partidos políticos de preservar, y en su caso, de demostrar, en todo momento, que cualquier acto que engendre la voluntad de un ciudadano para formar parte en las filas de un instituto político, esté amparado en el o los documentos que demuestren indefectiblemente el acto previo del consentimiento, siendo **ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no se tiene o tenía el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes.**

Lo anterior, porque, como se mencionó, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que, de manera insuperable, el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En este sentido, toda vez que María de los Ángeles Zavaleta Martínez manifiesta no haber otorgado su consentimiento, que su registro de afiliación se comprobó por la autoridad electoral competente, y que *el PVEM*, no cumplió su carga probatoria para demostrar que la afiliación sí se solicitó voluntariamente; esta autoridad electoral considera que existe una vulneración al derecho de afiliación de la quejosa y que, intrínsecamente, para la configuración de esa falta utilizaron sin autorización sus datos personales, lo cual, debe ser considerado por esta autoridad para la imposición de la sanción que, en su caso, amerite.

En el caso, se considera que **María de los Ángeles Zavaleta Martínez fue afiliada indebidamente al PVEM**, razón por la cual el presente procedimiento sancionador ordinario es **FUNDADO** en contra del instituto político denunciado, por las razones y consideraciones siguientes:

EL *PVEM* informó que no encontró registro dentro de su padrón de afiliados de María de los Ángeles Zavaleta Martínez.

No obstante, lo anterior, de las diligencias de investigación practicadas en el presente procedimiento, se advierte que la *DEPPP*, órgano central del *INE* encargado de la concentración de los padrones de los diversos partidos nacionales, así como de la verificación de los mismos, encontró a esa ciudadana registrada por el *PVEM*.

Es importante destacar que la *DEPPP*, en un primer momento, informó que, de la revisión a los padrones de los Partidos Políticos Nacionales con corte al 31 de marzo de 2017, no encontró registro válido de María de los Ángeles Zavaleta Martínez en el padrón de afiliados del *PVEM*.⁴⁸

No obstante, lo anterior obedeció a que la ciudadana María de los Ángeles Zavaleta Martínez, al haber sido registrada por otros partidos políticos distintos al *PVEM*, apareció como registro “Duplicados en dos o más PPN”.

En efecto, la *DEPPP* informó, en un primer momento, que el registro en el *PVEM* no se consideró como válido, al haber sido registrada, de manera simultánea, en diversos partidos políticos, sin que el instituto político denunciado acreditara la debida afiliación de María de los Ángeles Zavaleta Martínez.

Esto es, la *DEPPP* al detectar el registro de la ciudadana quejosa en otros institutos políticos, procedió a dar vista a los institutos políticos involucrados, entre ellos al *PVEM*, para que presentara el formato con firma autógrafa mediante el cual la ciudadana manifestara su intención de ser su afiliada, sin que dicho partido

⁴⁸ Correo electrónico de 13 de abril de 2018. Visible a páginas 24-25 del expediente.

acreditara tal circunstancia, razón por la cual no fue contabilizada como registro válido.

Sin embargo, tal y como se refirió con antelación, el *PVEM* sí llevó a cabo un registro de afiliación de María de los Ángeles Zavaleta Martínez, en el Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos, utilizando, para ello, sus datos personales.

Esto es, independientemente de que, se considere el registro de María de los Ángeles Zavaleta Martínez como militante válido o no del *PVEM*, lo cierto es que dicho instituto político llevó a cabo el registro preliminar de la ciudadana, sin acreditar, en ningún momento, la voluntad de la quejosa de afiliarse de manera libre y personal a ese partido político.

Es importante señalar que, en el presente procedimiento, al contar con la información antes referida se requirió al *PVEM* para que proporcionara la documentación correspondiente respecto a la ciudadana en comento, dicho instituto político fue omiso en aportarla, razón por la cual no acreditó de ninguna forma la afiliación libre, individual, voluntaria, personal y pacífica de la quejosa.

Ahora bien, el partido político denunciado, al dar contestación al emplazamiento y al desahogar la vista para formular alegatos, manifestó, entre otras cuestiones, que mediante oficio PVEM-INE-211/2018, informó a esta autoridad que, después de una consulta al Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos del *INE*, no encontró registro alguno de la ciudadana quejosa en su padrón de militantes. Lo anterior, no obstante que la búsqueda se realizó tanto en el apartado de *Registro de Afiliados-Consulta* como en el correspondiente a *Cancelación de Afiliados-Consulta*, ingresando en cada caso el nombre y clave de elector.

Al respecto, se debe señalar que, tal y como se refirió con antelación, la *DEPPP* sí detectó el registro de la ciudadana en el padrón de afiliados del instituto político denunciado, solo que, al haber sido registrada María de los Ángeles Zavaleta Martínez, a su vez, por distintos partidos políticos al *PVEM*, dicho órgano electoral procedió a dar vista a los mismos, con el objeto de que se pronunciaran sobre la afiliación de la ahora denunciante.

Lo anterior, en términos de lo previsto en el inciso d), del numeral 2, de los *LINEAMIENTOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS PADRONES DE AFILIADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES PARA LA CONSERVACIÓN DE SU REGISTRO Y SU PUBLICIDAD, ASÍ COMO PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE LOS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL*, que a la letra establece lo siguiente:

“Décimo Primero De la subsanación de los registros no válidos

...

2. Recibida la respuesta a la vista señalada en el numeral que precede, la DEPPP en coordinación con la DERFE, analizará cuáles registros pueden sumarse a los “Registros Preliminares”. Para tales efectos se considerará lo siguiente:

...

d) Respecto a los registros “Duplicados en dos o más PPN” pueden ser sumados a los “Registros Preliminares” siempre y cuando algún PPN presente el formato con firma autógrafa mediante el cual el ciudadano manifieste su deseo de continuar afiliado al PPN que corresponda y renuncia a cualquier otro. Cabe precisar que dicho formato deberá ser requisitado invariablemente con fecha posterior a la del oficio remitido por la DEPPP. (Formato Anexo 1)

El formato se encontrará disponible en el Sistema, sin menoscabo de que los PPN puedan utilizar otro formato, con la condición de que el mismo deberá ser requisitado con fecha posterior al oficio emitido por la DEPPP y en el mismo el ciudadano manifieste, sin lugar a duda, su voluntad de permanencia a un PPN y su renuncia a cualquier otro.”

En el particular, la *DEPPP*, a través del oficio INE/DEPPP/DE/DEPPF/1212/2017,⁴⁹ formuló vista al *PVEM* a fin de que se pronunciara sobre la afiliación de la quejosa.

No obstante, lo anterior, el partido político denunciado fue omiso en desahogar la vista que le fue formulada, esto es, no proporcionó la documentación que diera sustento al registro de afiliación de María de los Ángeles Zavaleta Martínez, es decir, no aportó el formato de afiliación correspondiente.

⁴⁹ Visible a páginas 93-95 del expediente.

Es por ello que, dicho órgano electoral determinó tener como registro no válido la afiliación de la ahora quejosa al instituto político denunciado, con base en lo establecido en los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, emitidos por el propio *INE* en la resolución *INE/CG85/2017*.

Sin embargo, como se precisó, con independencia de que el registro de afiliación de María de los Ángeles Zavaleta Martínez al *PVEM* sea considerado por la autoridad electoral como válido o no, lo cierto es que dicho instituto político sí llevo a cabo la acción de registrar a la ciudadana quejosa en su padrón de militantes, tal y como el propio partido político lo reconoce.

No pasa desapercibido que el *PVEM* manifestó que la página electrónica consultada por la quejosa no es la dirección de consulta oficial del Padrón de afiliados de los partidos políticos de *INE* (<https://www.sarp.com.mx/INE.aspx>), razón por la cual, a juicio del denunciado, el medio de prueba aportado por la denunciante, consistente en impresión de consulta de afiliación, carece de todo valor probatorio.

Al respecto, se debe precisar que, corresponde, en principio, la denunciante hacer del conocimiento los hechos que, a su juicio, constituyen una infracción en materia electoral, siendo ello la base del inicio de la investigación de la autoridad administrativa comicial.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo establecido en la Tesis **CXVI/2002**,⁵⁰ emitida por la *Sala Superior*, de rubro y contenido siguientes:

“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LOS HECHOS DENUNCIADOS SÓLO SON LA BASE DEL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN. - Conforme con el artículo 82, párrafo 1, inciso t), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para conocer la verdad de los hechos, es indudable que el ejercicio de la facultad de investigación que tiene el Instituto Federal Electoral, a través del secretario de la Junta General Ejecutiva no está sujeto o condicionado a los estrictos puntos de hecho referidos en el escrito de queja o denuncia. Estos puntos constituyen simplemente la base indispensable para dar inicio

⁵⁰ Consultable en la página del *Tribunal Electoral* o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=CXVI/2002&tpoBusqueda=S&sWord=CXVI/2002>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MAZM/JL/OAX/89/2018

al procedimiento correspondiente, pero una vez que el órgano sustanciador determina, prima facie, que tales cuestiones fácticas pueden ser materia de tal procedimiento, dicho órgano está facultado para hacer uso de esos poderes con el fin de llegar al conocimiento de la verdad de las cosas, en acatamiento de los principios de certeza y legalidad que rigen en la materia.”

En el particular, María de los Ángeles Zavaleta Martínez, además de hacer del conocimiento los hechos que, a su juicio, actualizan una infracción en materia electoral, esto es, la presunta afiliación indebida por parte de un instituto político, aportó un medio de prueba, que, independientemente de su origen, así como de su alcance y valor probatorio, da sustento a su afirmación y, sobre todo, sirve de base para el inicio de la investigación, que como se ha señalado, fue corroborada por la *DEPPP*, órgano ejecutivo del *INE*.

Finalmente, como acertadamente lo refiere el partido político denunciado, esta autoridad electoral ordenó el inicio de una nueva investigación, en distinto procedimiento, respecto a los datos contenidos en la página electrónica <https://www.sarp.com.mx/INE.aspx>, lo cual es independiente a la infracción que en el particular se conoce y por la cual se declara fundado el presente procedimiento.

Esto es, el origen y los datos que contiene la página electrónica de referencia, así como la investigación que se practique y la determinación que se adopte en ese procedimiento, en modo alguno inciden en la resolución del presente asunto.

En mérito de lo anterior, existe evidencia que hace suponer que la afiliación a la que se refiere en este apartado, fue producto de una acción ilegal por parte del *PVEM*.

Por lo anterior, este órgano colegiado considera pertinente declarar **FUNDADO** el presente procedimiento, pues se concluye que el *PVEM* infringió las disposiciones electorales tendentes a demostrar la libre afiliación de María de los Ángeles Zavaleta Martínez, quien apareció como afiliada a dicho instituto político, por no demostrar el acto volitivo de ésta para permanecer agremiada a ese partido.

En efecto, como se demostró anteriormente, la denunciante que apareció afiliada al *PVEM*, manifestó que en momento alguno otorgaron su consentimiento para ello,

siendo que dicho instituto político no demostró lo contrario, por lo que se actualiza la violación al derecho fundamental de libre afiliación garantizado desde la Constitución y la ley, según se expuso.

Al respecto, es importante destacar, en lo que interesa, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada el seis de junio de dos mil dieciocho, al resolver el medio de impugnación con clave SUP-RAP 141/2018:⁵¹

“...si los ciudadanos referidos alegaron que no dieron su consentimiento para pertenecer al partido político recurrente, implícitamente sostienen que no existe la constancia de afiliación atinente; por tanto, los ciudadanos no estaban obligados a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba tampoco son objeto de demostración los hechos negativos, salvo que envuelvan una afirmación.”⁵²

Esto es, en el tema que nos ocupa, conforme a lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada en el medio de impugnación SUP-RAP 141/2018, la carga probatoria corresponde a los partidos políticos, en el caso al *PVEM*, ente político que se encuentra obligado a demostrar que la solicitud de ingreso al partido fue voluntaria, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad o, en su caso, también tenía la posibilidad de probar sus afirmaciones a través de otros medios de prueba como lo serían documentales que justificaran la participación voluntaria de dichas personas en la vida interna del partido y con carácter de militante, como lo serían, por ejemplo, documentales que evidenciaran el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas, el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras,⁵³ circunstancia que, en el particular no aconteció.

Así pues, el *PVEM*, en el caso analizado, no demostró que la afiliación se realizó a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que dicha ciudadana haya dado

⁵¹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0141-2018.pdf

⁵² De conformidad con los numerales 461 de la *Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales*, en relación el diverso 441 de ese ordenamiento y 15, segundo párrafo, de la *Ley de Medios*

⁵³ Criterio sostenido en la sentencia dictada en el medio de impugnación SUP-RAP 141/2018.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MAZM/JL/OAX/89/2018

su consentimiento para ser afiliada, ni mucho menos que haya permitido o entregado datos personales para ese fin, los cuales se estiman necesarios para procesar las afiliaciones, dado que estos elementos se constituyen como insumos obligados para, en su momento, llevar a cabo una afiliación, de ahí que esto sea necesario e inescindible.

Con base en ello, ante la negativa de la denunciante de haberse afiliado al *PVEM*, correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de pruebas idóneas, que la afiliación se llevó a cabo a través de los mecanismos legales para ello, en donde constara fehacientemente la libre voluntad de la hoy promovente, lo que no hizo, siendo que el solo hecho de aparecer en su registro electrónico es insuficiente para acreditar el ejercicio libre, personal y voluntario del derecho de afiliación a dicho instituto político.

Es decir, no basta con que la quejosa aparezca como afiliada al *PVEM*, sino que dicho instituto político debió demostrar, con documentación soporte o pruebas idóneas, que dicha afiliación se realizó de forma libre o voluntaria, o bien, que la aparición del nombre y datos de la quejosa en sus registros preliminares ante la *DEPPP*, fue consecuencia de un error involuntario o de alguna circunstancia diversa, pero no lo hizo.

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación al *PVEM* implica, además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que pudiera haber servido de base o justificación al partido político para afiliar a la ahora quejosa.

Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales, tiene íntima vinculación con la afiliación indebida de María de los Ángeles Zavaleta Martínez, lo cual ya quedó debidamente acreditado y, como consecuencia de ello, merece la imposición de la sanción que se determinará en el apartado correspondiente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MAZM/JL/OAX/89/2018

Cabe referir que a similar conclusión arribó este Consejo General en la resolución INE/CG120/2018, de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/ALC/CG/39/2017, así como en la resolución INE/CG448/2018, de once de mayo de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2017, las cuales fueron confirmadas por el *Tribunal Electoral* al dictar sentencia el veinticinco de abril y once de mayo de dos mil dieciocho, en los medios de impugnación con clave SUP-RAP-047/2018⁵⁴ y SUP-RAP-137/2018,⁵⁵ respectivamente, derivado de una falta de la misma naturaleza a la que aquí se estudia, en donde se determinó que el uso de datos personales poseía un carácter intrínseco o elemento esencial para la configuración de una afiliación indebida.

TERCERO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de la falta denunciada, así como la responsabilidad por parte del **PVEM**, en el caso detallado en el considerando que antecede, procede ahora determinar la sanción correspondiente, en atención a lo dispuesto en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, relativo a la gravedad de la responsabilidad en que se incurra; el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; y, en su caso, la reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.

En relación con ello, el *Tribunal Electoral* ha sostenido que para individualizar la sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción electoral.

⁵⁴ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0047-2018.pdf

⁵⁵ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0137-2018.pdf

1. Calificación de la falta

A. Tipo de infracción

Partido	Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
PVEM	La infracción se cometió por una acción del partido político denunciado, que transgrede disposiciones de la <i>Constitución</i> , así como de la <i>LGIPE</i> y la <i>LGPP</i> .	La conducta fue el registro de María de los Ángeles Zavaleta Martínez como su afiliada y el uso no autorizado de los datos personales, por parte del PVEM	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; 443, párrafo 1, inciso a), de la <i>LGIPE</i> ; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la <i>LGPP</i> .

B. Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o prohibidas.

En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el caso concreto, se acreditó que el **PVEM** incluyó indebidamente en su padrón de afiliados, a María de los Ángeles Zavaleta Martínez, sin demostrar que para incorporarla medió la voluntad de éstos de inscribirse como militante de dicho instituto político, violentando con ello la norma electoral, en específico las disposiciones precisadas en el recuadro inserto en el subapartado previo.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de los ciudadanos mexicanos, de optar libremente por ser o no militante de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa

señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, efectivamente consintieron libremente en ser sus agremiados.

Por otra parte, como se analizó, para la afiliación indebida acreditada en el expediente que se resuelve se usaron los datos personales de la promovente sin que ésta hubiese otorgado su consentimiento para ello, lo cual, constituye un elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida.

En efecto, si bien es cierto, a partir de las constancias que obran en autos no está demostrado que los datos personales hubieran sido utilizados con un propósito diverso a la afiliación indebida en sí misma, o bien su difusión frente a terceros, lo es también que dicha información fue necesaria para materializar la incorporación de los datos de la actora al padrón de militantes del partido político denunciado.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo argumentado en la sentencia de siete de junio de dos mil dieciocho dictada por la Sala Superior al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-141/2018,⁵⁶ en la que se estableció, en lo que interesa sobre el tema, lo siguiente:

“...los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de un ciudadano pertenecer a un partido político, no puede alegar que existe uso indebido de sus datos personales porque se consideran públicos.

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban pertenecer.”

De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción correspondiente al **PVEM**.

⁵⁶ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0141-2018.pdf

C. Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que el **PVEM** transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la normativa interna del instituto partido político, y que, tal infracción se cometió en detrimento de los derechos de María de los Ángeles Zavaleta Martínez, esta situación no conlleva estar en presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de afiliación al instituto político denunciado, quien incluyó en su padrón de militantes a la hoy quejosa, sin demostrar el consentimiento previo para ello.

Cabe precisar, que en apartados subsecuentes se analizará a detalle el impacto que tuvo dicha infracción.

D. Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

- a) Modo.** En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles al **PVEM**, consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la *Constitución*; 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*, al incluir en su padrón de afiliados a María de los Ángeles Zavaleta Martínez, sin tener la documentación soporte que acredite fehacientemente la voluntad de ésta de pertenecer a las filas de ese instituto político.
- b) Tiempo.** En el caso concreto, como se razonó en el considerando que antecede, el registro de afiliación aconteció el **veintiuno de mayo de dos mil dieciséis**.

- c) **Lugar.** Con base en las razones plasmadas en el escrito de denuncia, se deduce que la falta atribuida al **PVEM** se cometió en el **estado de Oaxaca**.

E. Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Se considera que en el caso existe una conducta **dolosa** por parte del *PVEM*, en violación a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la *Constitución*; 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIFE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*.

La falta se califica como **dolosa**, por lo siguiente:

- El *PVEM* es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus constitucional de **entidad de interés público**, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la *Constitución*; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- El *PVEM* está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la *LGPP*.
- El de libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la

participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.

- Todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.
- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1 y 25, párrafo 1, incisos a) y e), de la *LGPP*.
- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria**.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad

nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.

- La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, es una violación de orden constitucional y legal que **requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento.**

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta se considera dolosa, porque:

- 1) María de los Ángeles Zavaleta Martínez aduce que no solicitó en momento alguno su registro o incorporación como militante al *PVEM*.
- 2) Quedó acreditado que María de los Ángeles Zavaleta Martínez apareció en el padrón de militantes del *PVEM*.
- 3) Independientemente de que el registro de militante de María de los Ángeles Zavaleta Martínez en el *PVEM*, sea considerado como válido o no, el instituto político denunciado registró de manera indebida a la ciudadana quejosa, utilizando, para ello, sus datos personales.
- 4) El partido político denunciado no demostró que la afiliación de la quejosa se hubiera realizado a través de los mecanismos legales y partidarios conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y voluntaria de la denunciante.
- 5) El partido denunciado no demostró ni probó que la afiliación de la quejosa fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun indiciaria, para estimar que la afiliación de la quejosa fue debida y apegada a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.

F. Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el **PVEM**, se cometió al afiliar indebidamente a María de los Ángeles Zavaleta Martínez, sin demostrar al acto volitivo de ésta tanto de ingresar o permanecer inscrita en su padrón de militantes como de haber proporcionado sus datos personales para ese fin.

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en garantizar el derecho de libre afiliación y la protección de los datos personales de los ciudadanos mexicanos, mediante la conservación de los documentos atinentes que permitan demostrar el acto de voluntad de los ciudadanos quejosos de militar en los distintos partidos políticos ni para el uso de sus datos personales.

2. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A. Reincidencia

Por cuanto a la **reincidencia** en que pudieron haber incurrido el *PVEM*, este organismo electoral autónomo considera que **no se actualiza**.

De conformidad con el artículo 458, párrafo 6 de la *LGIPE*, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere la ley en cita, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, la *Sala Superior* ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);

2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
3. Que en ejercicios anteriores el infractor **haya sido sancionado por esa infracción mediante Resolución o sentencia firme.**

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el *Tribunal Electoral*, a través de la Tesis de Jurisprudencia **41/2010**, de rubro **REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.**⁵⁷

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con anterioridad.

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta.

En este sentido, debe precisarse que, en el presente asunto, no puede considerarse actualizado dicho supuesto por cuanto hace al **PVEM**, pues en los archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya sancionado a ese instituto político por faltas como la que se sanciona por esta vía, que se hayan dictado con anterioridad a los hechos materia de la presente denuncia.

B. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

⁵⁷ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010>

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de la ciudadana, pues se comprobó que el *PVEM* realizó un registro para la afiliación de María de los Ángeles Zavaleta Martínez, sin demostrar contar con la documentación soporte correspondiente, que medió la voluntad de su agremiada de pertenecer o estar inscrita a dicho instituto político.
- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, de optar por ser o no militante de algún partido político, y la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.
- Para materializar la afiliación indebida de María de los Ángeles Zavaleta Martínez, se utilizaron indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para formar el padrón de afiliados del *PVEM*.
- No existió un beneficio por parte del partido denunciado, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral.
- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso Electoral.

- No existe reincidencia por parte del *PVEM*.

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente **calificar la falta** en que incurrió el *PVEM* como de **gravedad ordinaria**, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el partido denunciado dolosamente infringió el derecho de libre afiliación de María de los Ángeles Zavaleta Martínez, lo que constituye una violación al derecho fundamental de los ciudadanos reconocidos en la *Constitución*.

Al respecto, es importante precisar que para efectos de determinar el monto de la sanción a imponer se debe diferenciar, **como en el caso acontece, si se está ante una afiliación indebida** o una violación al derecho de libre afiliación en su vertiente de no permitirle a la quejosa ser desafiliada.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo resuelto por la Sala Superior al dictar sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-141/2018, en la que determinó, esencialmente, lo siguiente:

“Finalmente, para efectos de la sanción a imponer, consideró oportuno diferenciar entre aquellos ciudadanos de los que se utilizaron indebidamente sus datos personales para afiliarlos sin su consentimiento al partido denunciado (once ciudadanos) y aquélla que denunció la presunta indebida afiliación en su vertiente de falta de atención al derecho de desafiliación, puesto que, si bien en ambos casos estamos ante la presencia de una falta grave ordinaria, lo cierto es que en el primero de los supuestos hubieron hechos afirmativos tendentes a menoscabar el derecho de libre afiliación, utilizando datos personales de los afectados y en el segundo, se trata de una omisión, lo cual conlleva que la sanción imponer en cada supuesto sea diferenciada.

Por tal motivo, en el caso concreto, se estima que la motivación expuesta por el Instituto Nacional Electoral fue suficiente para justificar la individualización de la sanción.”

C. Sanción a imponer

Ahora bien, la mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción.

Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor entidad.⁵⁸

El artículo 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIFE*, dispone el catálogo de sanciones a imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México; reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita; y en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la *Constitución* y de la *LGIFE*, con la cancelación de su registro como partido político.

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción (especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción acreditada), así como la conducta realizada por el *PVEM* se determina que debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida.

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la *LGIFE*, confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que, a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realicen una falta similar.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

⁵⁸ Véase la tesis XXVIII/2003 del *Tribunal Electoral*, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que la *LGPE* no determina pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo establece las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

Con base en lo anterior, este Consejo General estima que, derivado de las circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida al **PVEM**, justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGPE*, consistente en una **MULTA unitaria por la afiliación indebida de María de los Ángeles Zavaleta Martínez**, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto.

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la sanción a imponer.

En este orden de ideas, es pertinente hacer notar, que ha sido criterio de esta autoridad, en la resolución INE/CG120/2018, de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/ALC/CG/39/2017, así como en la resolución INE/CG448/2018, de once de mayo de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MAZM/JL/OAX/89/2018

sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2017, las cuales fueron confirmadas por el *Tribunal Electoral* al dictar sentencia el veinticinco de abril y once de mayo de dos mil dieciocho, en los medios de impugnación con clave SUP-RAP-047/2018⁵⁹ y SUP-RAP-137/2018,⁶⁰ respectivamente, en los que se sancionó por una afiliación indebida de un ciudadano, en cada caso, con una multa equivalente a 642 (seiscientos cuarenta y dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento de la comisión de la conducta, sanción que se estima debe tomarse como base para el presente asunto, si se considera que en dichos asuntos se demostró la comisión de una infracción similar a la que acontece en los casos que aquí se resuelven.

En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta causa, es claro que la individualización de la sanción aplicada con motivo del registro de afiliación de María de los Ángeles Zavaleta Martínez al partido político denunciado, debe resultar proporcional, sin perder de vista las condiciones socioeconómicas del instituto político, y no simplemente, los hechos denunciados y acreditados en el presente procedimiento, a fin de que la sanción que se imponga resulte efectivamente proporcional sin ser excesiva.

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad debe determinar su monto o cuantía, **tomando en cuenta** las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que corresponda.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la

⁵⁹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_judiccial/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0047-2018.pdf

⁶⁰ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_judiccial/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0137-2018.pdf

graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión que tiene sustento en la Tesis relevante **XXVIII/2003**,⁶¹ emitida por el *Tribunal Electoral*, misma que a letra establece:

“SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.- En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.”

Ahora bien, a juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con base en lo dispuesto en la fracción II del numeral citado, lo procedente es imponer una **multa** equivalente a **seiscientos cuarenta y dos días de Unidades de Medida y Actualización al PVEM, por el registro de afiliación de María de los Ángeles Zavaleta Martínez.**

Es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la *Constitución* —efectuada por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones.

⁶¹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003>

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 10/2018,⁶² del *Tribunal Electoral*, de rubro y contenido siguiente:

“MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.- De la interpretación sistemática de los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transitorios segundo y tercero del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como 44, párrafo primero, inciso aa), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando en consideración el principio de legalidad que rige en los procedimientos sancionadores, se advierte que el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del ilícito.”

Sentando lo anterior, se procede a realizar el cálculo de la sanción que corresponde al *PVEM*, con base en lo expuesto a continuación:

<i>PVEM</i>		
Total de quejosos	Unidad de Medida y Actualización 2016	Sanción a imponer
1	\$73.04	\$46,891.68

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, pues sin ser gravosa, sí puede inhibir al *PVEM*, para que en el futuro vigile el cumplimiento de las normas de la materia.

D. El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la infracción

Se estima que la infracción cometida por parte del *PVEM*, aun cuando causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos

⁶² Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=Jurisprudencia,10/2018>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MAZM/JL/OAX/89/2018

objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de la infracción.

E. Las condiciones socioeconómicas del infractor

Sobre este punto, es preciso señalar que conforme al Acuerdo INE/CG339/2017, emitido por este *Consejo General* el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se estableció que, entre otros, el **PVEM** recibiría mensualmente en el presente ejercicio, por concepto de financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes, la siguiente cantidad:

SUJETO	Monto del financiamiento público para el sostenimiento de Actividades Ordinarias del mes de septiembre 2018
PVEM	\$30,708,417.00

Ahora bien, según fue informado por la *DEPPP*, a través del oficio **INE/DEPPP/DE/DPPF/5693/2018**, el monto de la ministración mensual correspondiente a septiembre de dos mil dieciocho, debía ser ajustado en función de las sanciones administrativas pendientes de cubrir por dicho instituto político nacional, por lo cual la cifra total a recibir sería la siguiente:

SUJETO	IMPORTE DE LA MINISTRACIÓN DE SEPTIEMBRE DE 2018	IMPORTE TOTAL DE LAS SANCIONES SEPTIEMBRE 2018	IMPORTE DE REINTEGRO DE FINANCIAMIENTO LOCAL PARA GASTOS DE CAMPAÑA	IMPORTE NETO DE LA MINISTRACIÓN
PVEM	\$30,708,417.00	\$15,347,622.00	\$0.00	\$15,360,795.00

F. Impacto en las actividades del sujeto infractor

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta al **PVEM**, no es de carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida, respecto al monto del financiamiento que recibirá por concepto de actividades ordinarias permanentes en el mes de septiembre del año en curso, los siguientes porcentajes:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MAZM/JL/OAX/89/2018

Partido político	Año	Monto de la sanción por ciudadano. ⁶³	Ciudadanos indebidamente afiliados	% de la ministración mensual por ciudadano
PVEM	2016	\$46,891.68	1	0.27%

Por consiguiente, la sanción impuesta al **PVEM** no es de carácter gravoso, si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual correspondiente al mes de septiembre de este año.

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción cometida por el **PVEM** (especialmente los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con el financiamiento que recibe del **INE** para el mes de septiembre de dos mil dieciocho, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político sancionado.

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el partido político de mérito —tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagar sin que ello afecte sus operaciones ordinarias, además de que las sanciones son proporcionales a las faltas cometidas y se estima que, sin resultar excesivas ni ruinosas, pueden generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la *Sala Superior* en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-250/2009⁶⁴, es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

CUARTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la *Constitución*,⁶⁵ se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación, así

⁶³ Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.

⁶⁴ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm>

⁶⁵ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª), Página: 2864, Rubro: “**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.**”

como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previsto en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara **fundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra del **PVEM**, al infringir las disposiciones electorales de libre afiliación de **María de los Ángeles Zavaleta Martínez**, en términos de lo establecido en el Considerando SEGUNDO de esta Resolución.

SEGUNDO. En términos del Considerando TERCERO de la presente Resolución, se impone al **PVEM**, una **multa** por la afiliación indebida de María de los Ángeles Zavaleta Martínez, de **seiscientas cuarenta y dos (642) Unidades de Medida y Actualización equivalente a \$46,891.68 (cuarenta y seis mil ochocientos noventa y un pesos 68/100 M.N.)** [Ciudadana registrada como afiliada en 2016].

TERCERO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7 de la LGIPE, el monto de la multa impuesta al **PVEM**, será deducido de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su Considerando TERCERO.

CUARTO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previsto en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Notifíquese personalmente a María de los Ángeles Zavaleta Martínez, así como al **PVEM**, por conducto de su respectivo representante ante este Consejo General; y por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1237/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ORDINARIO
DENUNCIANTE: VICTORIA PÉREZ CLAVEL
Y OTRAS
DENUNCIADO: MOVIMIENTO CIUDADANO

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/VPC/CG/116/2018, INICIADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR DIVERSAS CIUDADANAS EN CONTRA DEL PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN SU INDEBIDA AFILIACIÓN AL CITADO INSTITUTO POLÍTICO Y, EN SU CASO, EL USO NO AUTORIZADO DE SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 12 de septiembre de dos mil dieciocho.

GLOSARIO

Comisión:	Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
Consejo General:	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución Federal:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DEPPP:	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
DERFE:	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral
IFE:	El otrora Instituto Federal Electoral
Instituto o INE:	Instituto Nacional Electoral

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/VPC/CG/116/2018

Ley de Medios:	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
LGPP:	Ley General de Partidos Políticos
LGIPE:	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
COFIPE o Código:	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
MC:	Movimiento Ciudadano
Quejasas o denunciantes:	Victoria Pérez Clavel, Juana López López y Patricia Lara Celestino
Reglamento de Quejas:	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
Sala Superior:	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
UTCE:	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE

R E S U L T A N D O

I. PRESENTACIÓN DE QUEJAS.¹ En las fechas que a continuación se citan, se recibieron, en la *UTCE*, tres escritos de queja signados por igual número de ciudadanas quienes, en esencia, alegaron la posible violación a su derecho de libertad de afiliación, atribuida al partido político *MC* y, en su caso, el uso indebido de sus datos personales para tal fin:

NO.	NOMBRE DEL QUEJOSO	FECHA DE PRESENTACIÓN
1	Victoria Pérez Clavel ²	16/abril/2018
2	Juana López López ³	19/abril/2018
3	Patricia Lara Celestino ⁴	30/abril/2018

¹ Visible a fojas 1 a 17 del expediente.

² Visible en las páginas 1 a 3 del expediente.

³ Visible en las páginas 7 a 10 del expediente.

⁴ Visible en la página 16 del expediente.

II. REGISTRO, ADMISIÓN Y RESERVA DE EMPLAZAMIENTO. Mediante acuerdo de ocho de mayo de dos mil dieciocho,⁵ el Titular de la *UTCE* instruyó la integración del expediente en que se actúa, el cual quedó registrado con la clave **UT/SCG/Q/VPC/CG/116/2018**, como un procedimiento sancionador ordinario por la presunta indebida afiliación y el uso indebido de datos personales para ese fin.

En el acuerdo en cita, se admitió a trámite el procedimiento de sanción señalado con anterioridad y se ordenó reservar lo conducente respecto al emplazamiento, hasta en tanto fueran compiladas y analizadas las constancias que integrarían dicho expediente, y se determinara la pertinencia o no de la realización de nuevas diligencias de investigación.

III. EMPLAZAMIENTO. El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho,⁶ previa integración de las constancias aludidas en el párrafo anterior, se ordenó el emplazamiento al partido político *MC*, para efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la conducta que se le imputó y aportara las pruebas que considerara pertinentes.

Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito.

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

EMPLAZAMIENTO				
CONSTANCIA CON LA CUAL SE MATERIALIZÓ LA DILIGENCIA	SUJETO EMPLAZADO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE CONTESTACIÓN AL EMPLAZAMIENTO	PRUEBAS OFRECIDAS
INE- UT/7537/2018 ⁷	<i>MC</i>	23/05/2018.	30/05/2018.	El partido político denunciado formuló diversas manifestaciones respecto del cúmulo

⁵ Visible a fojas 18 a 24 del expediente.

⁶ Acuerdo visible en las páginas 68 a la 74 del expediente.

⁷ Visible en la página 76

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/VPC/CG/116/2018

EMPLAZAMIENTO				
CONSTANCIA CON LA CUAL SE MATERIALIZÓ LA DILIGENCIA	SUJETO EMPLAZADO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE CONTESTACIÓN AL EMPLAZAMIENTO	PRUEBAS OFRECIDAS
				<p>probatorio del expediente, las cuales serán valoradas en el apartado correspondiente del presente Proyecto de Resolución.</p> <p>Asimismo, debe señalarse que el partido MC ofreció las pruebas Instrumental de Actuaciones y Presuncional en su doble aspecto, legal y humana.</p>

IV. ALEGATOS. El diecinueve de junio de dos mil dieciocho,⁸ se ordenó dar vista a las partes, a efecto de que en vía de alegatos manifestaran lo que a su derecho conviniera.

El acuerdo de vista para alegatos, se diligenció en los siguientes términos:

VISTA PARA ALEGATOS				
CONSTANCIA CON LA CUAL SE MATERIALIZÓ LA DILIGENCIA	SUJETO NOTIFICADO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE CONTESTACIÓN	OBSERVACIONES
INE-UT/9812/2018 ⁹	MC	19/06/2018	21/06/2018	Oficio MC-INE-403/2018

⁸ Visible en las páginas 110 a la 112 del expediente.

⁹ Visible en las páginas 112 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/VPC/CG/116/2018

VISTA PARA ALEGATOS				
CONSTANCIA CON LA CUAL SE MATERIALIZÓ LA DILIGENCIA	SUJETO NOTIFICADO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE CONTESTACIÓN	OBSERVACIONES
INE- UT/9815/2018 ¹⁰	Patricia Lara Celestino	20/06/2018	No contestó	-----
INE- UT/9814/2018 ¹¹	Juana López López	21/06/2018	No contestó	-----
INE- UT/9813/2018 ¹²	Victoria Pérez Clavel	22/06/2018	No contestó	-----

V. ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, toda vez que no había diligencias pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la *Comisión*.

VI. SESIÓN DE LA COMISIÓN. En la Octogésima Cuarta Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el seis de septiembre de dos mil dieciocho, la *Comisión* analizó y aprobó el proyecto, por unanimidad de votos de sus integrantes presentes, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGPE*.

¹⁰ Visible en las páginas 117 a la 119 del expediente.

¹¹ Visible en las páginas 133 a la 135 del expediente.

¹² Visible en las páginas 138 a la 140 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/VPC/CG/116/2018

En el caso, las conductas objeto del presente procedimiento sancionador son la presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución Federal*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), t) y u) de la *LGPP*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte del partido político *MC*, en perjuicio de Patricia Lara Celestino, Juana López López y Victoria Pérez Clavel.

Ahora bien, conforme al artículo 23 del *COFIPE*, los partidos políticos deben ajustar su conducta a las disposiciones establecidas en el citado *Código*, correspondiendo al otrora *IFE* —ahora *INE*— vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n); y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho *Código*, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38 del dispositivo legal en cita, las cuales son sancionables por el *Consejo General*.

Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443, párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la *LGIPE* y 25, de la *LGPP*, respectivamente.

En consecuencia, siendo atribución del máximo órgano de dirección del *INE* conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, esta autoridad resulta competente para conocer y resolver respecto de las presuntas infracciones denunciadas, atribuidas al instituto político *MC*, derivadas esencialmente, de la afiliación y utilización indebida de datos personales.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,¹³ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de militantes.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIPE* —los cuales contienen reglas que ya se encontraban previstas en el *COFIPE*, en los artículos 342, párrafo 1, inciso a); 356, 361, 364, 365 y 366—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, segundo párrafo, de la *Constitución Federal*, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO

En el presente asunto se debe subrayar que algunas de las presuntas faltas (indebida afiliación) se cometieron **durante la vigencia del *COFIPE***, puesto que, en los casos de **Victoria Pérez Clavel** y **Patricia Lara Celestino**, el registro o

¹³ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/VPC/CG/116/2018

afiliación de las quejas al partido político **MC** se realizó antes del treinta y uno de marzo de dos mil catorce, fecha en la cual se encontraba vigente dicho código.

Ciudadana	Fecha de afiliación
Victoria Pérez Clavel	03/03/2012
Patricia Lara Celestino	20/03/2014

En efecto, de conformidad con lo establecido en el Punto cuarto de los Lineamientos para la Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su registro, aprobados por el Consejo General del entonces *IFE* mediante Acuerdo CG617/2012, de treinta de agosto de dos mil doce, los Partidos Políticos Nacionales debían capturar en el *Sistema de Cómputo desarrollado por la Unidad Técnica de Servicios de Informática*, los datos de todos sus afiliados en el periodo comprendido **entre el uno de abril de dos mil trece y el treinta y uno de marzo de dos mil catorce**, siendo que precisamente el registro realizado en ese periodo corresponden las más recientes fechas de alta de las quejas en el partido **MC**.

Por tanto, si al momento de la comisión de las presuntas faltas se encontraba vigente el **COFIPE**,¹⁴ es claro que este ordenamiento legal debe aplicarse para las cuestiones sustantivas del presente procedimiento, al margen que las faltas pudieran haber sido advertidas por las quejas y cuestionadas mediante las quejas que dieron origen al presente asunto, una vez que dicha norma fue abrogada por la **LGIPE**, así como que este último ordenamiento sea fundamento para cuestiones procesales o adjetivas.

Por otra parte, por lo que hace a **Juana López López**, al no tener dato de registro de afiliación, lo procedente es tomar en cuenta el momento en que se recibió el escrito de queja en la *UTCE*, lo cual, ocurrió el diecinueve de abril de dos mil dieciocho, por lo tanto, la legislación comicial aplicable para la resolución de fondo del asunto será la **LGIPE**, sin que la misma cause perjuicio a la quejosa en razón de que las disposiciones entre el **COFIPE** y la **LGIPE** son análogas.

¹⁴ El **COFIPE** estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce.

Lo anterior, de acuerdo con el criterio adoptado por el *Consejo General* en la resolución INE/CG30/2018, misma que fue confirmada el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho por la *Sala Superior* al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-18/2018, **en el sentido de que al ser imposible establecer la fecha precisa en que se realizó la afiliación al instituto político, se tomaría la de presentación de la denuncia, porque era la única sobre la que se tenía certeza respecto a esa situación.**

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO

1. Planteamiento del caso

En el presente asunto se debe determinar si el partido político *MC* afilió indebidamente o no a **Patricia Lara Celestino, Juana López López y Victoria Pérez Clavel**, quienes alegan no haber dado su consentimiento para estar en sus filas, haciendo para ello uso ilegítimo de su información personal, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución Federal*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), t) y u) de la *LGPP*.

2. Marco normativo

A) Constitución, tratados internacionales y ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a las conductas en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de las y los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6.

[...]

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

[...]

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

...

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y

locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución Federal*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no sólo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la *Constitución Federal*, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, toda y todo ciudadano mexicano tienen derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de la ciudadanía mexicana constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracción I, párrafo segundo, *in fine*, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución Federal*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanas y ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución Federal*. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas

específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la *Constitución Federal*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo las y los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 24/2002 emitida por la *Sala Superior*, de rubro ***DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES.***

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de

acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,¹⁵ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de las y los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

¹⁵ Consultable en la página https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes —asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de las y los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que las y los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

Artículo 23. Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:

I...

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/VPC/CG/116/2018

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Que es derecho de las y los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;

- Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
- Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGPE*, que es obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* del *IFE* por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *H. Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su constitución y registro.

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática de este Instituto y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.
- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución Federal*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano o ciudadana estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron

ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la *Constitución Federal* y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna del MC

A efecto de tener claridad acerca del proceso que un ciudadano o ciudadana debe llevar a cabo para convertirse en militante del instituto político ahora denunciado, se hace necesario analizar la norma interna del mismo, para lo cual, enseguida se transcribe la parte conducente de los Estatutos del partido MC.¹⁶

...

ARTÍCULO 3

De la Afiliación y la Adhesión

¹⁶ Consultados en el enlace electrónico <https://www.movimientociudadano.mx/>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/VPC/CG/116/2018

1. Todo ciudadano/a inscrito en el Registro Federal de Electores puede solicitar ya sea su afiliación como militante del Movimiento Ciudadano, o su adhesión al mismo como simpatizante.

Los jóvenes menores de 18 años, pero mayores de 14, también podrán solicitar su adhesión como simpatizantes del Movimiento.

Los militantes aceptan y se comprometen a cumplir los Documentos Básicos del Movimiento Ciudadano así como a participar activamente dentro del mismo y realizar las tareas que se les asignen.

Los simpatizantes se comprometen a respetar los Documentos Básicos y contribuir a alcanzar los objetivos del Movimiento Ciudadano mediante su apoyo económico, intelectual, del voto o de propaganda, de opinión o de promoción.

2. La afiliación y la adhesión son individuales, libres, pacíficas y voluntarias y se deben solicitar en la instancia del Movimiento Ciudadano más próxima al domicilio del interesado.

3. En caso de que se produzca la afiliación o adhesión de una persona ante una instancia de la estructura territorial diferente al lugar de su residencia, ésta debe informar a la organización del sitio de su domicilio. El órgano dirigente ante el cual se presente la solicitud decidirá la afiliación o adhesión.

La actividad política, la gestión social y de promoción que realicen los dirigentes, afiliados y adherentes, no constituyen por sí mismas relación laboral.

Las afiliaciones y adhesiones se notificarán al órgano superior, y así sucesivamente hasta llegar a la Coordinadora Ciudadana Nacional, para que se incluya en el Registro Nacional del Movimiento. La Coordinadora Ciudadana Nacional se reserva el derecho de aprobar y acreditar las solicitudes en última instancia.

4. Para afiliarse al Movimiento Ciudadano se deberán suscribir los siguientes compromisos:

a) Aceptar y cumplir la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos del Movimiento Ciudadano.

b) Acatar como válidas las resoluciones que dicte el Movimiento Ciudadano.

c) Participar activa, disciplinada y permanentemente en la realización de los objetivos del Movimiento Ciudadano y en las comisiones y tareas que se le asignen.

d) Contar con la credencial para votar expedida por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral.

e) Llenar la solicitud respectiva en donde se manifieste su propósito de afiliarse y conste su firma o huella digital.

5. La credencial de militante del partido expedida por la Comisión Operativa Nacional testimonia la afiliación, el registro de aceptación y la inscripción regular de los militantes del Movimiento Ciudadano.

6. Los Ciudadanos que deseen participar en el Movimiento Ciudadano podrán hacerlo de manera directa como asistentes y/o ponentes en conferencias, reuniones o eventos, sin necesidad de asumir los documentos básicos del Movimiento.

....

De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente:

- Para militar en el partido político MC, los mexicanos, mujeres y hombres, deberán aceptar y suscribir los Documentos Básicos y sus políticas específicas.
- Para estar afiliado al partido MC, los mexicanos mujeres y hombres deberán aceptar la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos y deberán de colaborar con algunas tareas del Partido, especialmente las electorales.
- Uno de los requisitos formales para afiliarse al partido político MC, consiste en presentar una solicitud de afiliación por escrito, a la instancia partidaria correspondiente.

D) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la *Constitución Federal*, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

3. CARGA Y ESTANDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante del instituto político *MC*, por regla general debe acudir a las instancias partidistas competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso en particular el partido *MC*), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del *COFIPE*, precepto que, derivado de la reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la *LGPP*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en

condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y voluntaria.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley,

pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la *Sala Superior*, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**,¹⁷ donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Jurisprudencia 21/2013, de rubro: **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,¹⁸ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria¹⁹ y como estándar probatorio²⁰.

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación²¹ ha estimado que es posible derrotar la presunción de

¹⁷ http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

¹⁸ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60

¹⁹ Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

²⁰ Véase la jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. ²² Véase la nota 35.

²¹ Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA**, **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA**

inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la *Sala Superior* consideró en la sentencia referida, que para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciante sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que *el que afirma está obligado a probar* misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la *Ley de Medios*, con fundamento en el diverso 441, de la *LGIPE*, lo que implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano o ciudadana desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento ordinario sancionador una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino que conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento

que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior, incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

Otro aspecto importante a tomar en consideración, radica en que, si el partido político cumple con la carga probatoria que corresponde a su afirmación en el sentido de que la afiliación cuestionada estuvo precedida del consentimiento del quejoso, es decir, si exhibe prueba suficiente sobre la legitimidad de la afiliación

motivo de queja, debe considerarse que prevalece el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio.

Al respecto, cabe destacar que, si la autenticidad o el contenido de dicho documento es cuestionado por el quejoso, se debe estar a las disposiciones contenidas en la *LGIPE* y el *Reglamento de Quejas*, las cuales aluden a las reglas que deben observarse tratándose de la objeción de documentos, como parte del derecho contradictorio que les asiste a las partes, de oponerse o refutar las pruebas que ofrezcan o que se allegue la *UTCE* durante la secuela de un procedimiento ordinario sancionador.

Así, el artículo 24 del citado cuerpo normativo establece que:

- 1. Las partes podrán objetar las pruebas ofrecidas durante la sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores **ordinario** y especial, siempre y cuando se realice antes de la audiencia de desahogo.*
- 2. Para los efectos de lo señalado en el párrafo que antecede, las partes podrán objetar la autenticidad de la prueba o bien su alcance y valor probatorio **debiendo indicar** cuál es el aspecto que no se reconoce de la prueba o por qué no puede ser valorado positivamente por la autoridad, esto es, el motivo por el que a su juicio no resulta idóneo para resolver un punto de hecho.*
- 3. Para desvirtuar la existencia o verosimilitud de los medios probatorios ofrecidos, no basta la simple objeción formal de dichas pruebas, sino que es necesario señalar las razones correctas en que se apoya la objeción **y aportar elementos idóneos para acreditarlas, mismos que tenderán a invalidar la fuerza probatoria de la prueba objetada.***

Énfasis añadido

Esto es, de conformidad con el precepto reglamentario previamente transcrito, **no basta con objetar de manera formal el medio de prueba ofrecido por el partido político para desvirtuar la existencia o verosimilitud de la constancia de afiliación, sino que es necesario señalar las razones correctas en que se apoya la objeción y, también, aportar en el momento procesal oportuno, los elementos idóneos para acreditar su objeción.**

Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia 4/2005²² de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes:

DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y PUEBLA, ESTA ÚLTIMA ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1998). *En términos de lo dispuesto por los artículos 324 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 330 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, los documentos privados provenientes de las partes deben ser reconocidos expresa o tácitamente para que adquieran el valor probatorio que las propias legislaciones les otorgan. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio reiterado de que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que es necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción. Debido a que en las legislaciones adjetivas en cuestión no se establece ninguna regla específica sobre la carga probatoria en la hipótesis apuntada, para saber a quién corresponde dicha carga de la prueba sobre la objeción formulada, deben atenderse los hechos en que se funde la misma, aplicándose las reglas genéricas establecidas en los artículos 289 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 263 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, en cuanto a que a cada parte corresponde probar los hechos de sus pretensiones. Por tanto, si la objeción de un documento privado proveniente de los interesados base de sus pretensiones se funda en la circunstancia de no haber suscrito el documento el objetante, a él corresponde la carga de la prueba. Dicho de otra forma, quien invoca una situación jurídica está obligado a probar los hechos fundatorios en que aquélla descansa; por lo contrario, quien sólo quiere que las cosas se mantengan en el estado que existen en el momento en que se inicia el juicio, no tiene la carga de la prueba, pues desde el punto de vista racional y de la lógica es evidente que quien pretende innovar y cambiar una situación actual, debe soportar la carga de la prueba.*

Énfasis añadido

²² Jurisprudencia 1a./J. 4/2005, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Página 266.

Bajo ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió, en concordancia con los preceptos invocados en líneas que anteceden, estableció que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que debe ser necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción, es decir, que al objetante corresponde la carga de la prueba.

A efecto de robustecer lo anterior, se citan criterios de diversos Tribunales Colegiados de Circuito, en los que se han pronunciado en tal sentido sobre el tema:

- ***DOCUMENTOS PRIVADOS. OBJECCIÓN A LOS.***²³
- ***DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. CONFORME AL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA.***²⁴
- ***DOCUMENTOS PRIVADOS. PARA NEGARLES VALOR PROBATORIO, NO BASTA LA SIMPLE OBJECCIÓN, SINO QUE DEBEN SEÑALARSE LAS CAUSAS EN QUE LA FUNDE Y DEMOSTRARLAS.***²⁵
- ***DOCUMENTOS PRIVADOS, CARGA DE LA PRUEBA EN CASO DE OBJECCIÓN A LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)***²⁶
- ***DOCUMENTOS PRIVADOS. CARGA DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR LA OBJECCIÓN RESPECTO DE LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA CONTENIDA EN ELLOS***²⁷

²³ Jurisprudencia I.3Oc. J/8, Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, agosto de 1996, Página 423.

²⁴ Tesis Aislada XV.4o.12 C, Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, septiembre de 2009, Página 3128.

²⁵ Jurisprudencia III. 1Oc. J/17, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Número 63, marzo de 1993, Página 46.

²⁶ Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, agosto de 1993, Página 422.

²⁷ Tesis XXXI.3º 8 L, Tercer Tribunal Colegiado de Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, abril de 2002, Página 1254.

- **DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)²⁸**

De igual forma, resulta aplicable la Jurisprudencia I.3o.C. J/11²⁹, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes:

DOCUMENTOS PRIVADOS INSUFICIENTEMENTE OBJETADOS POR EL PROPIO FIRMANTE, VALOR PROBATORIO DE LOS. *En tratándose de documentos privados, debe hacerse la distinción entre aquellos que provienen de terceras personas y los que se atribuyen a las partes litigantes en la controversia. Respecto de los primeros, basta la objeción del instrumento privado, debidamente razonada, para que pierda su valor probatorio, quedando a cargo del oferente la carga de la prueba y apoyar su contenido aportando otros elementos de convicción, y en relación con el segundo supuesto, para tener por satisfecho lo dispuesto por el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es menester que la parte a quien perjudique realice en tiempo, forma y suficiencia la objeción, para que pierda su alcance probatorio dicho instrumento. De esta manera, se tiene que si en un caso la contraparte del oferente, al dársele vista con el documento exhibido, se limitó a manifestar que no lo había firmado, tal aseveración no pudo constituir la causa suficiente de objeción que demeritara el alcance de esa probanza, ya que para tal efecto resulta indispensable que existan causas motivadoras de la invalidez de la prueba y que se aportaran las pruebas idóneas para tal fin, como pudieron ser las periciales grafoscópicas, grafológicas y caligráficas; elementos que no se rindieron para acreditar la impugnación, como lo dispone el artículo 341 del código citado.*

Énfasis añadido

²⁸ Tesis II. o C, 495 C, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, septiembre de 2005, Página 1454.

²⁹ Tesis I.3o. C J/11, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre de 1997, Página 615.

En igual sentido, el Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito en la Jurisprudencia III.1o.C. J/29³⁰, sostuvo el referido criterio en el siguiente sentido:

DOCUMENTOS PRIVADOS, PRUEBA DE LA FALSEDAD DE LA FIRMA DE LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). *Una interpretación armónica de los artículos 342, 343, 344, 345, 346 y 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, lleva a concluir que cuando se objeta la autenticidad de la firma de un documento privado es necesario pedir el cotejo de la misma con una señalada como indubitable; además, debe ofrecerse la prueba pericial respectiva, dado que la falsificación de la firma es un punto que sólo puede ser determinado por una persona con conocimientos especiales en la materia, es decir, por un perito grafógrafo, aun cuando exista diferencia notoria entre las firmas cuestionadas, porque tal circunstancia, por sí sola, no revela lo apócrifo de una de ellas, sino únicamente la diferencia entre ambas.*

Énfasis añadido

Lo anterior, en suma, significa que para destruir la presunción de inocencia que surge en favor del denunciado cuando aporta elementos de prueba idóneos para demostrar que la afiliación cuestionada estuvo precedida de la manifestación de voluntad del quejoso, tal como las constancias de afiliación correspondientes, o bien, elementos que pongan de manifiesto que el quejoso realizó hechos positivos derivados de su militancia, no basta que, de manera abstracta y genérica, el quejoso afirme que dichos medios de convicción no son veraces o auténticos.

Ello en virtud de que, conforme a la normatividad que rige los procedimientos sancionadores electorales y que inexcusablemente está obligado a seguir este *Consejo General*, resulta imperativo que quien objeta un medio de prueba, señale específicamente cuál es la parte que cuestiona, y al efecto aporte, o cuando menos señale, conforme a la regla general relativa a que a quien afirma le corresponde probar —vigente en los procedimientos sancionadores electorales conforme a lo establecido por la *Sala Superior*—, los elementos objetivos y ciertos que puedan conducir a destruir la eficacia probatoria de los elementos aportados por el

³⁰ Jurisprudencia III.1o.C. J/29, Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, página 680.

denunciado en su defensa, pues de otra manera, el principio de presunción de inocencia deberá prevalecer apoyado en las evidencias allegadas al procedimiento por el presunto responsable.

4. HECHOS ACREDITADOS Y PRECISIONES

Como se ha mencionado, la denuncia presentada por las quejosas, versa sobre la supuesta violación a su derecho de libertad de afiliación, al ser incorporadas al padrón del partido político *MC*, sin su consentimiento, así como la utilización de sus datos personales, por dicho partido político para sustentar tales afiliaciones.

Ahora bien, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de las infracciones denunciadas, debe precisarse lo siguiente:

Victoria Pérez Clavel		
Quejosa	Información proporcionada por la DEPPP ³¹	Manifestaciones del partido político ³²
Escrito de 19/04/2018	Fecha de afiliación: 03/03/2012	Confirmó la existencia de un registro a nombre de la denunciante, con fecha de alta el <u>16/02/2012</u> , y anexó copia —con certificación interna—, del formato de afiliación.
Observaciones		
<p>En la cédula de afiliación se precisa que Victoria Pérez Clavel es militante desde el 16/02/2012, lo cual, se estima, no se contrapone con lo informado por la <i>DEPPP</i>, en el sentido que la quejosa apareció como afiliada del partido político denunciado ante este Instituto, el 03/03/2012.</p> <p>Es importante destacar que, la constancia referida en el párrafo anterior, tiene una firma y la leyenda: <i>Por mi libre voluntad, solicito a usted mi ingreso a Movimiento Ciudadano, en virtud de estar de acuerdo con sus Documentos Básicos. Asimismo, me comprometo a cumplir con sus Estatutos y junto con sus demás miembros a trabajar con entusiasmo por “SOLUCIONES CIUDADANAS PARA TL.”</i></p>		

³¹ Correo electrónico de 10/05/2018, visible en las páginas 31 y 32 del expediente.

³² Oficio MC-INE-258/2018, visible en las páginas 46 a 49 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/VPC/CG/116/2018

Tales elementos conducen a esta autoridad a concluir, que la afiliación de Victoria Pérez Clavel al partido *MC*, se llevó conforme a las disposiciones legales e internas que le resultaron aplicables.

Conclusiones

Del análisis vertido respecto a la información y pruebas recabadas se advierte lo siguiente:

- 1.- Quedó acreditado que la quejosa apareció en el padrón de militantes del partido político *MC*.
- 2.- *MC* aportó elementos a partir de los cuales esta autoridad concluye que, la afiliación de la quejosa a dicho partido se realizó conforme con las disposiciones legales y estatutarias aplicables.
- 3.- La quejosa no realizó manifestaciones que desvirtúan los elementos aportados por el partido político denunciado.

Patricia Lara Celestino

Quejosa	Información proporcionada por la DEPPP³³	Manifestaciones del partido político³⁴
Escrito sin fecha, recibido en la <i>UTCE</i> el 30/04/2018.	No se cuenta con la fecha de afiliación. Fecha de cancelación: 18/04/2018	La denunciante en algún momento fue militante del partido <i>MC</i> . Actualmente no se encuentra afiliada. Adjuntó copia certificada de: - Cédula de afiliación de 20/03/2014 - Solicitud de baja de 26/04/2018. Y copia simple de la credencial para votar.

Observaciones

MC informó que la quejosa era militante de dicho partido político, aportando una constancia de afiliación de 20/03/2014, al tiempo que también señaló que ya había sido dada de baja, lo cual, se

³³ Correo electrónico de 10/05/2018, visible en las páginas 31 y 32 del expediente.

³⁴ Oficio MC-INE-258/2018, visible en las páginas 46 a 49 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/VPC/CG/116/2018

estima, no se contrapone con lo informado por la *DEPPP*, en el sentido que la quejosa fue militante, pero solicitó su baja.

Es importante destacar que, la constancia referida en el párrafo anterior, tiene una firma y las leyendas:

Por mi libre voluntad, solicito a usted mi ingreso a Movimiento Ciudadano, en virtud de estar de acuerdo con sus Documentos Básicos. Asimismo, me comprometo a cumplir con sus Estatutos y junto con sus demás miembros a trabajar con entusiasmo por México en Movimiento.

Declaro bajo protesta de decir verdad que no me encuentro afiliado (a) a ningún otro Partido Político Nacional, reconozco y acepto que acorde a lo establecido en el artículo 5, numeral del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en este acto renuncio a mi afiliación previa a cualquier otro partido político.

...

Aviso de confidencialidad: Los datos relativos al nombre, apellidos, paterno y materno, entidad de residencia y fecha de afiliación son información pública que integra el padrón de afiliados del partido político y que se difunde en internet. Movimiento Ciudadano utilizará el resto de sus datos personales recabados en los procedimientos de afiliación y/o adición para incorporarlos al Registro Nacional del Movimiento y no serán difundidos sin consentimiento expreso de sus titulares. Para su mayor información sobre el tratamiento y los derechos que pueda hacer valer, pueden acceder al aviso de confidencialidad integral de la página de internet <http://movimientociudadano.mx/>

Tales elementos conducen a esta autoridad a concluir, que la afiliación de Patricia Lara Celestino al MC, se llevó conforme a las disposiciones legales e internas que le resultaron aplicables.

Conclusiones

Del análisis vertido respecto a la información y pruebas recabadas se advierte lo siguiente:

- 1.- Quedó acreditado que la quejosa en su momento fue militantes del partido MC.
- 2.- MC aportó elementos a partir de los cuales esta autoridad concluye que, la afiliación de la quejosa a dicho partido, en su momento, se realizó conforme con las disposiciones legales y estatutarias aplicables.
- 3.- La quejosa posteriormente solicitó su baja del padrón del partido denunciado.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/VPC/CG/116/2018

Juana López López		
Quejosa	Información proporcionada por la DEPPP³⁵	Manifestaciones del partido político³⁶
Escrito de 17/04/2018	Informó que la denunciante estuvo afiliada al partido político <i>MC</i> <u>sin aportar fecha de registro</u> , no obstante se encontró fecha de cancelación de registro de 18/04/2018.	Confirmó que era militante del partido, <u>sin aportar cedula de afiliación</u> . Aporta copia certificada del escrito por medio del cual Juana López López, solicitó la baja al padrón de militantes de dicho instituto político.
Observaciones		
El partido político denunciado informó que la quejosa fue su militante, <u>sin aportar alguna constancia de afiliación</u> , por lo que no acreditó con documental fehaciente que en su momento fue voluntad de la denunciante ser militante.		
Conclusiones		
<p>1.- En autos no obra constancia que acredite la legal afiliación de Juana López López al partido <i>MC</i>.</p> <p>2.- De conformidad con la información proporcionada por la <i>DEPPP</i> y el propio denunciado, a partir de abril del año en curso, la denunciante no es militante del partido político <i>MC</i>.</p> <p>3.- A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del partido <i>MC</i>, que la citada ciudadana negó haberse afiliado a ese instituto político y que éste no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida.</p>		

Finalmente, debe precisarse que las constancias aportadas por la *DEPPP*, al ser documentos emitidos por una autoridad dentro del ámbito de sus facultades, se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del *Reglamento de Quejas*, mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2, de la *LGIPE* y 27, párrafo 2, del Reglamento citado; por tanto, tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

³⁵ Correo electrónico de 10/05/2018, visible en las páginas 31 y 32 del expediente.

³⁶ Oficio MC-INE-258/2018, visible en las páginas 46 a 49 del expediente.

En el mismo tenor, las documentales allegadas al expediente por el partido político denunciado, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracción II, del *Reglamento Quejas*; por lo que, por si mismas, carecen de valor probatorio pleno, y sólo alcanzarán ese grado cuando, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, generen convicción en este *Consejo General* sobre la veracidad de los hechos a que se refieren, ello al tenor de lo preceptuado en los artículos 462, párrafo 3 de la *LGIPE*, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención.

5. CASO CONCRETO

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por las quejasas, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5 del *COFIPE*, cuyo contenido se replica en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; esto es, **partido político**, candidato o inclusive cualquier persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

Ahora bien, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, la autoridad debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

En principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita así como el señalamiento que formula en contra de la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde al quejoso.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho *el que afirma está obligado a probar*, recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la *Ley de Medios*, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441, de la *LGIPE*.

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, referido previamente, que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que contaba con el consentimiento de la quejosa para afiliarla a su partido político, y no la ciudadana que negó haber solicitado su inclusión en el padrón de militantes del partido político MC.

Así, como vimos, en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, está demostrado a partir de la información proporcionada por la *DEPPP*, que las ciudadanas denunciantes, se encontraron como afiliadas del partido político *MC*.

Por otra parte, en uno de supuestos que más adelante se detallará, el partido *MC* no demuestra con medios de prueba, que la afiliación respectiva sea el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de la ciudadana, en la que ella misma, *motu proprio*, exprese su consentimiento y por ende, proporcione sus datos personales a fin de llevar a cabo la afiliación a dicho instituto político.

Así pues, en este caso la carga de la prueba corresponde al instituto político *MC*, en tanto que el dicho de la denunciante consiste en afirmar que no dio su consentimiento para ser afiliada, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba; en tanto que el partido político, cuya defensa consiste básicamente en afirmar que sí cumplió las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación, tiene el deber de probar esa situación.

Ahora bien, tal y como quedó de manifiesto en el apartado del *MARCO NORMATIVO* de la presente Resolución, así como en el correspondiente a *CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO*, **la libertad de afiliación en materia político-electoral, es un derecho reconocido y así garantizado para toda ciudadana y ciudadano de nuestro país**, al menos desde hace varias décadas, tanto a nivel constitucional como legal, **el cual es concebido como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido político, permanecer afiliado a éste, desafiliarse e, incluso, no pertenecer a ninguno**. Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección de datos personales e información relacionada con la vida privada de las personas, es igualmente un derecho con una trayectoria de protección por demás lejana.

En este sentido, es pertinente reiterar que la garantía y protección a los citados derechos, evidentemente no deriva de disposiciones reglamentarias al interior de los institutos políticos, que prevean como obligación del partido político la conservación de los expedientes de afiliación de cada miembro, ni tampoco a partir de la emisión de los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, emitidos por el

propio *INE* en la Resolución CG617/2012, sino que, como se vio, el derecho tutelado deviene de disposiciones de rango supremo, el cual debe ser tutelado en todo momento, y no a partir de normas internas o reglamentarias que así lo establezcan.

En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos políticos, en todas sus vertientes, es un derecho de las y los ciudadanos previsto como garantía constitucional en nuestro país desde hace décadas, también lo es la obligación de los partidos políticos de preservar, y en su caso, de demostrar, en todo momento, que cualquier acto que engendre la voluntad de un ciudadano para formar parte en las filas de un instituto político, o bien, ya no pertenecer a estos, deben estar amparados en el o los documentos que demuestren indefectiblemente el acto previo del consentimiento –para los casos en que se aduce no mediar consentimiento previo para ser afiliados- siendo **ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no se tiene o tenía el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes**, o –para el caso de la omisión o negativa de atender solicitudes de desafiliación- demostrar que dieron cauce legal a las solicitudes de desafiliación de manera pronta y oportuna y, que derivado de ello, ya no se encuentran en sus registros de militantes.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que en su defensa se deben presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

En suma, toda vez que los denunciantes manifiestan no haber otorgado su consentimiento para ser agremiados al partido; que está comprobada la afiliación de todos, y que el instituto político *MC*, no cumplió su carga para demostrar que la afiliación sí se solicitó voluntariamente, o bien, que sí dio curso legal a las solicitudes de desafiliación, tal y como se expondrá más adelante, **esta autoridad electoral considera que existe una vulneración al derecho de afiliación de las quejas y que, intrínsecamente, para la configuración de esa falta, se utilizaron sin autorización sus datos personales**, lo cual, debe ser considerado por esta autoridad para la imposición de la sanción que, en cada caso, amerite.

APARTADO A. AFILIACIONES QUE, A JUICIO DE ESTA AUTORIDAD, SE HICIERON CONFORME CON LA NORMATIVA APLICABLE

A partir de los razonamientos establecidos en el apartado previo, esta autoridad considera que la afiliación de **las ciudadanas que a continuación se citan**, conforme a las pruebas que obran en autos, en específico la información proporcionada por la *DEPPP*, así como por lo manifestado por el partido *MC* y las documentales que éste aportó, fueron apegadas a derecho.

No.	Quejosa
1	Victoria Pérez Clavel
2	Patricia Lara Celestino

Para acreditar la afiliación de las ciudadanas citadas, el partido político *MC* exhibió copias certificadas de los *formatos de afiliación*, en los cuales se pueden observar elementos tales como nombre, domicilio, clave de elector y lo más importante,

firmas autógrafas de las personas que los suscribieron; además, cabe precisar que dichos formatos fueron llenados de puño y letra con letra de molde.

Dichos medios de convicción, revisten el carácter de **documentales privadas**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 358, párrafo 3, inciso a), 359 párrafos 1 y 2, del *COFIPE*, cuyos artículos coinciden con los diversos 461, párrafo 3, inciso a) y 462 párrafos 1 y 2, de la *LGIPE*, en relación con el 22 párrafo 1, fracción I, del *Reglamento de Quejas*.

En efecto, si bien es cierto las cédulas respectivas fueron exhibidas en copia certificada, autorizadas por la Secretaria General de Acuerdos de la Comisión Operativa Nacional del partido político, circunstancia que no las torna en prueba documental pública con valor probatorio pleno, lo cierto es que, conforme a lo establecido en los artículos 18, numeral 5, inciso d) y 20, numeral 2, inciso v) de los Estatutos del partido político *MC*, dicha funcionaria partidista, está facultada emitir certificaciones cuando así se requiera.

En tal sentido, dichas manifestaciones formales de afiliación, son un indicio de que las citadas ciudadanas fueron afiliadas al instituto político en mención por voluntad propia.

En tal virtud, al dar vista de alegatos, se corrió traslado con tales documentos a las denunciantes referidas, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con dichas probanzas.

Por lo que se procede al análisis de cada caso en particular.

○ **Victoria Pérez Clavel**

Como ha quedado establecido, con la finalidad de respetar el derecho de audiencia de la quejosa involucrada, al momento de dar vista de alegatos, la autoridad instructora corrió traslado a la misma con el comprobante de afiliación exhibido por el partido político *MC*, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera.

En este sentido, la quejosa fue omisa en responder a la vista que le fue formulada por la *UTCE*, haciendo nulo su derecho de realizar las manifestaciones que estimara pertinentes y, en su caso, de desvirtuar el medio de prueba exhibido.

Por tanto, se colige que, al no existir oposición alguna de la denunciante en relación con el documento exhibido por el partido político *MC*, existe un reconocimiento tácito de ésta de haber suscrito y firmado dicho comprobante, lo que de suyo permite concluir que sí existió su voluntad para ser afiliada al partido denunciado.

En efecto, el derecho de contradicción probatoria no es más que la posibilidad de las partes de defenderse, de refutar y oponerse a las afirmaciones realizadas por la parte contraria, y de ser el caso, de aportar elementos que le permitan desvirtuar lo dicho en su contra.

No obstante, la oportunidad que tuvo la denunciante de refutar el documento que aportó el partido político *MC* para acreditar que sí medió la voluntad libre y expresa de la quejosa de querer pertenecer a las filas de agremiados de ese ente político, lo cierto es que dicha promovente no hizo valer ese derecho de contradicción.

Ahora bien, con independencia de las conclusiones previamente expuestas, esta autoridad debe tutelar el derecho fundamental de afiliación de **Victoria Pérez Clavel**, es decir, estamos frente a la defensa de un derecho humano de naturaleza político-electoral, que en términos del artículo 1° de la *Constitución Federal* debe ser respetado, protegido y garantizado por todas las autoridades del Estado Mexicano.

En tal sentido, se tiene que la voluntad de la denunciante es no pertenecer al partido político *MC*, por lo que se debe ordenar al instituto político mencionado para que, en el supuesto que la quejosa continúe en su padrón de afiliados, **sin mayor trámite**, cancele el registro de la misma como su militante, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentó su denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la *UTCE*, las pruebas que amparen el cumplimiento.

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la *Sala Superior* en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017, de cinco de enero de dos mil diecisiete, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el *INE*, que lo vincule con un instituto político en particular.

○ **Patricia Lara Celestino**

Al igual que en el caso anterior, a efecto de garantizar el principio de contradicción que exige que ambas partes puedan tener los mismos derechos de ser escuchados y de practicar pruebas, con la finalidad de que ninguna de las partes se encuentre indefensa frente a la otra, al momento de dar vista de alegatos, la autoridad instructora corrió traslado a la denunciante con copia del formato de afiliación presentado por el partido político *MC*, con la finalidad de que, con independencia de los alegatos que al efecto formulara, expresa lo que a su derecho conviniera en relación con ese documento.

En este sentido, la quejosa fue omisa en responder a la vista que le fue formulada por la *UTCE*, haciendo nulo su derecho de realizar las manifestaciones que estimara pertinentes y, en su caso, de desvirtuar el medio de prueba exhibido.

Por tanto, se colige que, al no haber oposición alguna de la denunciante en relación con el documento exhibido por el partido político *MC*, existe un reconocimiento tácito de ésta de haber suscrito y firmado dicho comprobante, lo que de suyo permite concluir que sí existió su voluntad para ser afiliada al partido denunciado.

En efecto, el derecho de contradicción probatoria no es más que la posibilidad de las partes de defenderse, de refutar y oponerse a las afirmaciones realizadas por la parte contraria, y de ser el caso, de aportar elementos que le permitan desvirtuar lo dicho en su contra.

No obstante, la oportunidad que tuvo la denunciante de refutar el documento que aportó el partido político *MC* para acreditar que sí medió la voluntad libre y expresa de la quejosa que querer pertenecer a las filas de agremiados de ese ente político, lo cierto es que dicha promovente no hizo valer ese derecho de contradicción.

No pasa desapercibido para esta autoridad el hecho de que al momento en que se dicta la presente Resolución su registro como afiliada al partido político ya había sido cancelado —26 de abril de 2018—, de conformidad con lo informado tanto por la *DEPPP*, como por el propio denunciado.

Sin embargo, es preciso señalar que no está en debate la cuestión de desafiliación o no de la ciudadana, sino la acreditación por parte del instituto político *MC*, de que fue afiliada de manera libre, voluntaria e individual, circunstancia que como ha quedado establecido el partido político denunciado sí acreditó, al exhibir la documental idónea para tal efecto, misma que no fue debatida por la quejosa.

**APARTADO B. CIUDADANA QUE FUE AFILIADA INDEBIDAMENTE AL PARTIDO POLÍTICO
*MC***

Ahora bien, como ha quedado precisado el partido político *MC* reconoció la afiliación de **Juana López López**; por lo que este órgano colegiado considera pertinente declarar **fundado** el presente procedimiento, pues se concluye que el partido denunciado violentó su derecho de libre afiliación, en su vertiente positiva, toda vez que no demostró la libre afiliación de ésta. Lo anterior, conforme a los siguientes argumentos:

En principio, porque el partido político denunciado no aportó la cédula de afiliación correspondiente, a fin de acreditar ante esta autoridad que el registro de **Juana López López** aconteció de forma libre, individual, voluntaria, personal y pacífica y que además para llevar a cabo ese trámite se cumplió con los requisitos establecidos para tal efecto en su normatividad interna.

En efecto, se considera que, en el caso, el medio de prueba esencial para acreditar la debida afiliación de la ciudadana **es la cédula de afiliación** o, en su caso, cualquier otra documentación establecida en la normatividad de *MC* en materia de

afiliación, en la que constara el deseo de la ciudadana a afiliarse a ese partido político, al estar impresa de su puño y letra, el nombre, firma, domicilio y datos de identificación, circunstancia que no aconteció, tal y como se estableció en párrafos precedentes.

Al efecto, dicho denunciado manifestó que la denunciante fue su militante, con estatus válido, sin precisar algo más, y si bien, al responder al emplazamiento de ley indicó que las afiliaciones de los ciudadanos se hacen de forma libre y por voluntad propia y que el partido político *MC* siempre actúa de buena fe para la procedencia de las mismas, confiando plenamente en los datos que asientan las personas en las correspondientes cédulas de afiliación, lo cierto es que tal argumento no lo exime de su responsabilidad, toda vez que el partido denunciado tiene la obligación de verificar, revisar y constatar fehacientemente que la ciudadana otorgó, de forma personal, libre y voluntaria, su intención de afiliarse a sus filas, a través de los respectivos documentos y formatos en los que conste y se pruebe ese hecho.

En consecuencia, también tiene el deber de **conservar y resguardar**, con el debido cuidado, la documentación soporte en la que conste la afiliación libre y voluntaria de sus militantes o afiliados, puesto que, se insiste, le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esto es así, porque los partidos políticos, son entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, por lo que están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar la documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

En conclusión, ante los hechos denunciados originalmente, esta autoridad electoral nacional requirió al partido político *MC* para que aclarara la imputación que se hizo en su contra, además de que se le emplazó por ese motivo y se le dio oportunidad para que, en vía de alegatos, manifestara lo que a su derecho conviniera, pero en ninguna de las etapas procesales realizó alegación que desvirtuara el agravio de la quejosa, ni ofreció o aportó prueba en descargo que resultara idónea o suficiente para eximirlo de responsabilidad.

Esto es, el partido *MC* no demostró que la afiliación de **Juana López López**; se realizó a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que dicha denunciante haya dado su consentimiento libre para ser afiliada, conforme a lo siguiente:

- El artículo 2, de los Estatutos del partido político *MC* establece que, la afiliación y la adhesión son individuales, personales, libres, pacíficas y voluntarias y se deben solicitar en la instancia del dicho partido más próxima al domicilio del interesado.
- Asimismo, el precepto 4, inciso e), del citado ordenamiento interno, prevé las personas que deseen afiliarse al partido político *MC*, deberán **llenar la solicitud respectiva en donde se manifieste su propósito de afiliarse y conste su firma o huella digital.**

Con base en lo anterior, es claro que el partido político *MC* establece ciertos requisitos específicos de afiliación, para acreditar la manifestación libre, voluntaria y previa de la persona, de entre las que destacan, la suscripción de una solicitud en la que conste la firma o huella del solicitante; lo anterior, a fin de dotar de certeza respecto de la voluntad libre y sin presión de quienes deseen ser inscritos; requisitos que, en el caso que se analiza no fueron cumplidos por el denunciado, no obstante, lo establecido en su propia legislación interna.

En mérito de lo anterior, existe evidencia que hace suponer que la afiliación a la que se refiere en este apartado, fue producto de una acción ilegal por parte del instituto político *MC*.

Por lo anterior, este órgano colegiado considera pertinente declarar **fundado** el presente procedimiento en contra del partido *MC*, pues se concluye que infringió las disposiciones electorales tendentes a demostrar la libre afiliación de **Juana López López**; quien apareció como afiliada a dicho instituto político, por no demostrar el **ACTO VOLITIVO** de ésta para ser agremiada a ese partido.

En efecto, como se demostró anteriormente, la denunciante que apareció afiliada al partido político *MC*, manifestó que en momento alguno otorgó su consentimiento para ello, siendo que dicho instituto político no demostró lo contrario, por lo que se actualiza la violación al derecho fundamental de libre afiliación garantizado desde la Constitución y la ley, según se expuso.

Así pues, el partido político *MC*, en el caso analizado, no demostró que la afiliación se realizó a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que dicha ciudadana haya dado su consentimiento para ser afiliada, ni mucho menos que haya permitido o entregado datos personales para ese fin, los cuales se estiman necesarios para procesar la afiliación, dado que estos elementos se constituyen como insumos obligados para, en su momento, llevar a cabo una afiliación, de ahí que esto sea necesario e inescindible.

Con base en ello, ante la negativa de **Juana López López**; de haberse afiliado al partido político *MC*, correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de pruebas idóneas, que la afiliación se llevó a cabo a través de los mecanismos legales para ello, en donde constara fehacientemente la libre voluntad de la promovente, lo que no hizo, siendo que el solo hecho de aparecer en su registro electrónico es insuficiente para acreditar el ejercicio libre, personal y voluntario del derecho de afiliación a dicho instituto político.

Es decir, no basta con que la quejosa aparezca como afiliada al partido político *MC* en sus registros electrónicos, sino que dicho instituto político debió demostrar, con documentación soporte o pruebas idóneas, que dicha afiliación se realizó de forma libre o voluntaria, o bien, que la aparición del nombre y datos de la quejosa en su padrón de militantes, fue consecuencia de un error involuntario o de alguna circunstancia diversa, pero no lo hizo.

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación al instituto político MC implica, además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que pudiera haber servido de base o justificación al partido político para afiliarse a la ahora quejosa.

Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales, tiene íntima vinculación con la indebida afiliación de la quejosa, lo cual ya quedó debidamente acreditado y, como consecuencia de ello, merece la imposición de las sanciones que se determinarán en el apartado correspondiente.

Cabe referir que similar criterio adoptó este máximo órgano de dirección, al dictar las resoluciones INE/CG787/2016 e INE/CG53/2017,³⁷ dentro de los procedimientos sancionadores ordinarios UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y UT/SCG/Q/PRD/JL/SIN/6/2016 acumulados, y UT/SCG/Q/MECG/JD06/CHIH/4/2016, respectivamente.

Es de destacar que la resolución INE/CG53/2017, fue confirmada por la Sala Superior, al resolver el recurso de apelación **SUP-RAP-107/2017**, donde se consideró que ***conforme a las reglas de carga de la prueba, el partido político denunciado debía justificar que la quejosa fue afiliada voluntariamente, de manera que la prueba idónea que podía aportar al procedimiento para demostrar su hipótesis de inocencia, era precisamente la constancia de afiliación de la ciudadana, sin que así lo hubiera hecho.***

No pasa desapercibido para esta autoridad el hecho de que al momento en que se dicta la presente Resolución su registro como afiliada al partido político ya había sido cancelado —18 de abril de 2018—, de conformidad con lo informado tanto por la DEPPP, como por el propio denunciado.

³⁷ Aprobado en Sesión Extraordinaria del Consejo General celebrada el siete de marzo de dos mil diecisiete. Consultable en la liga de internet http://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-resoluciones/2017/03_Marzo/CGex201703-07/CGex201703-7-rp-2.1.pdf

Sin embargo, es preciso señalar que no está debate la cuestión de desafiliación o no de la ciudadana, sino la acreditación por parte del partido político *MC*, de que fue afiliada de manera libre, voluntaria e individual, circunstancia que como ha quedado establecido el partido político denunciado no acreditó, con la documental idónea para tal efecto, misma que no fue debatida por la quejosa.

CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de las faltas denunciadas, así como la responsabilidad del partido político *MC*, en el caso detallado en el considerando que antecede, procede ahora determinar la sanción correspondiente.

En relación con ello, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que para individualizar la sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción electoral.

1. Calificación de la falta

A) Tipo de infracción

Partido	Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
<i>MC</i>	La infracción se cometió por una acción del partido político denunciado, que transgrede disposiciones de la <i>Constitución Federal</i> , la <i>LGIPE</i> y la <i>LGPP</i> .	La conducta fue la afiliación indebida y el uso no autorizado de los datos personales de una ciudadana por parte del partido <i>MC</i> .	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la <i>Constitución Federal</i> ; y 5, párrafo 1; 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la <i>LGIPE</i> , y 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e), t) y u), de la <i>LGPP</i> .

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o prohibidas.

En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de las y los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el caso concreto, se acreditó que el partido político *MC* incluyó indebidamente en su padrón de afiliados, a **Juana López López**; sin demostrar que para incorporarla medió la voluntad de ésta de inscribirse y permanecer como militante de dicho instituto político, violentando con ello lo establecido en los artículos 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; y 5, párrafo 1; 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la *LGPE*, y 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u), de la *LGPP*.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de las y los ciudadanos mexicanos, de optar libremente por ser o no militante de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, efectivamente consintieron libremente en ser sus agremiados.

Por otra parte, como se analizó, para la indebida afiliación acreditada en el expediente que se resuelve se usaron los datos personales de la promovente sin que ésta hubiese otorgado su consentimiento para ello, lo cual, constituye un elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida.

En efecto, si bien es cierto, a partir de las constancias que obran en autos no está demostrado que los datos personales hubieran sido utilizados con un propósito diverso a la afiliación indebida en sí misma, o bien, su difusión frente a terceros, lo es también que dicha información fue necesaria para materializar la incorporación de los datos de los actores al padrón de militantes del partido político denunciado.

De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción correspondiente al partido político involucrado.

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que el partido político *MC* transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la normativa interna del instituto político, y que tal infracción se cometió en detrimento de los derechos de una ciudadana, esta situación no conlleva estar en presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de afiliación al denunciado, quien la incluyó en su padrón.

D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

- a) Modo.** En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles al partido político *MC*, consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I, de la *Constitución Federal*; 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u), de la *LGPP*, al incluir en su padrón de afiliados a, sin tener la documentación soporte que acredite fehacientemente la voluntad de ésta de pertenecer a las filas del instituto político en el cual se encontró incluida.

b) Tiempo. De la información que obra en el expediente, no se puede desprender la fecha precisa en que **Juana López López** fue afiliada; por lo cual se tomará en cuenta el diecinueve de abril de dos mil dieciocho, momento en que se recibió su escrito de queja en la *UTCE*, tal y como se precisó en el Considerando SEGUNDO de esta Resolución intitulado *NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO*.

c) Lugar. Con base en la información proporcionada por la *DEPPP*, se deduce que la falta atribuida al partido político se cometió en el estado de Aguascalientes.

E) Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Se considera que en el caso existe una conducta **dolosa** por parte de *MC*, en violación a lo previsto en los artículos ya establecidos en los párrafos anteriores.

La falta se califica como **dolosa**, por lo siguiente:

- *MC* es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus constitucional de **entidad de interés público**, de conformidad con lo previsto en el artículo 41, de la *Constitución Federal*.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la *Constitución Federal*; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- *MC* está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de las y los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la *LGPP*.

- El de libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental**, cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadana o ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
- La desafiliación a un partido político, es una modalidad del derecho fundamental de libre afiliación, por el cual la ciudadanía elige libremente, en cualquier momento y sin restricción alguna de terceros, ya no pertenecer al mismo.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de las y los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no sólo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.
- Todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación o desafiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.
- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a) y e), de la *LGPP*.
- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria**.

- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición (para el caso de solicitudes de desafiliación), en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, es una violación de orden constitucional y legal que **requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento.**

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta se considera dolosa, porque:

- 1) La quejosa aduce que no solicitó en momento alguno su registro o incorporación como militante al partido hoy denunciado.
- 2) Quedó acreditado que la quejosa apareció en el padrón de militantes del partido político *MC*.
- 3) El partido político denunciado no demostró que la afiliación de la quejosa se hubiera realizado a través de los mecanismos legales y partidarios conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y voluntaria de la denunciante.
- 4) *MC* no demostró ni probó que la afiliación de la quejosa fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun indiciaria, para estimar que

la afiliación de la quejosa fue debida y apegada a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.

F) Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el partido político *MC*, se cometió al afiliar indebidamente a **Juana López López**, sin demostrar al acto volitivo de ésta de ingresar en su padrón de militantes, así como de haber proporcionado sus datos personales para ese fin.

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en garantizar el derecho de libre afiliación y la protección de los datos personales de los ciudadanos mexicanos y que la conducta se acredita ante la ausencia de los documentos atinentes que permitan demostrar el acto de voluntad de la ciudadana quejosa de militar en el partido político denunciado, ni para el uso de sus datos personales.

2. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A. Reincidencia

Por cuanto a la **reincidencia** en que pudo haber incurrido el partido materia de esta Resolución, este organismo electoral autónomo considera que **no se actualiza**.

De conformidad con el artículo 458, párrafo 6, de la *LGIFE*, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere la mencionada ley, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, la *Sala Superior* ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como

agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);
2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
3. Que en ejercicios anteriores el infractor **haya sido sancionado por esa infracción mediante Resolución o sentencia firme.**

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Tesis de Jurisprudencia **41/2010**, de rubro ***REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.***³⁸

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con anterioridad.

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta.

En este sentido, debe precisarse que en el presente asunto, no puede considerarse actualizado dicho supuesto, pues en los archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya sancionado a *MC* por faltas como la que se sanciona por esta vía, que se hayan dictado con anterioridad a los hechos materia de las presentes denuncias.

³⁸ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010>

B. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de **Juana López López**, pues se comprobó que el partido político *MC* la afilió sin demostrar contar con la documentación soporte correspondiente, que medió la voluntad de ésta de pertenecer a dicho instituto político.
- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho de libre afiliación de las y los ciudadanos mexicanos, de optar por ser o no militante de algún partido político, y la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.

- Para materializar la indebida afiliación de Juana López López, se utilizaron indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para formar el padrón de afiliados del partido político *MC*.
- No existió un beneficio por parte del partido denunciado o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral.
- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso Electoral.
- No existe reincidencia por parte del partido político *MC*.

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente **calificar la falta** en que incurrió el partido *MC* como de **gravedad ordinaria**, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el partido denunciado dolosamente infringió el derecho de libre afiliación de la hoy quejosa, lo que constituye una violación al derecho fundamental de la ciudadana reconocido en la *Constitución Federal*.

C. Sanción a imponer

Ahora bien, la mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción.

Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y

lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor entidad.³⁹

El artículo 456, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*, dispone el catálogo de sanciones a imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México; reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita; y en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la *Constitución Federal* y de la Ley Electoral, con la cancelación de su registro como partido político.

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción (especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción acreditada), así como la conducta realizada por el partido político *MC* se determina que debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida.

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la *LGIPE*, confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realicen una falta similar.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

³⁹ Véase la tesis XXVIII/2003 de la Sala Superior, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que la *LGIPE*, no determina pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo establece las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

Asimismo, es importante tomar en cuenta el número de ciudadanos afiliados indebidamente al partido político *MC*, es decir, **una ciudadana**.

Con base en lo anterior, este *Consejo General* estima que, derivado de las circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida al partido político *MC*, justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 456, de la *LGIPE*, consistente en una **MULTA**, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto.

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la sanción a imponer.

En este orden de ideas, es pertinente hacer notar, que ha sido criterio de esta autoridad, al resolver los procedimientos UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y su acumulado, y UT/SCG/Q/MECG/JD06/CHIH/4/2016, el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis y siete de marzo de dos mil diecisiete, respectivamente —y que fue reiterado en el diverso SCG/Q/FSG/CG/33/INE/80/2014 y su acumulado SCG/Q/JAEB/JL/CHIH/37/INE/84/2014, resuelto por este órgano máximo de dirección el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, bajo la clave INE/CG401/2017—, en los que se sancionó por una indebida afiliación de un ciudadano, en cada caso, con una multa equivalente a 642 (seiscientos cuarenta y dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento de la comisión de la conducta, sanción que se estima debe tomarse como base para el presente asunto, si se considera que en dichos asuntos se demostró la comisión de una infracción similar a la que acontece en el caso que nos ocupa.

En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta causa, es claro que la individualización de la sanción aplicada con motivo de la afiliación indebida de **Juana López López** a *MC*, debe resultar proporcional sin perder de vista las condiciones socioeconómicas del instituto político denunciado, y no simplemente, los hechos denunciados y acreditados en el presente procedimiento, a fin de que la sanción que se imponga resulte efectivamente proporcional sin ser excesiva.

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad debe determinar su monto o cuantía, **tomando en cuenta** las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar de forma individual la multa que corresponda.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión que tiene sustento en la Tesis relevante **XXVIII/2003**,⁴⁰ emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, misma que a letra establece:

SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.- *En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.*

Ahora bien, a juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con base en lo dispuesto en la fracción II del numeral citado, lo procedente es imponer una **multa** equivalente a **seiscientos cuarenta y dos** días de salario mínimo general para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) al partido **MC**.

Al respecto, es un hecho notorio que se invoca en términos de lo establecido en el artículo 461 de la **LGIPE**, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fija anualmente los montos respectivos, mismos que al ser relacionados con las fechas de afiliación, para obtener la sanción.

Ahora bien, es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la *Constitución Federal*—efectuada por

⁴⁰ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/VPC/CG/116/2018

decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones.

Al respecto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió la Jurisprudencia 10/2018, que establece:

MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.- De la interpretación sistemática de los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transitorios segundo y tercero del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como 44, párrafo primero, inciso aa), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando en consideración el principio de legalidad que rige en los procedimientos sancionadores, se advierte que el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del ilícito.

Por lo tanto, con base en lo anterior, la multa en el presente caso será de seiscientos cuarenta y dos unidades de medida y actualización, vigentes en el año dos mil dieciocho.

En esas condiciones, tomando en consideración la temporalidad de la infracción, lo procedente es tomar la unidad de medida y actualización vigente al momento de la comisión de la infracción, arrojando lo siguiente:

Ciudadana	Temporalidad de infracción	Sanción impuesta	Valor de la UMA en 2018	MULTA
Juana López López	19/04/2018	642 UMAS	\$80.60	\$51,745.20
Total				\$51,745.20 (Cincuenta y un mil, setecientos cuarenta y cinco pesos 20/100 M.N.)

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, pues sin ser gravosa, sí puede inhibir al partido político *MC*, para que en el futuro vigile el cumplimiento de las normas de la materia, pues constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, ya que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, se concluye que la misma resulta eficaz y proporcional.

Cabe precisar que igual sanción, ha sido impuesta por este *Consejo General*, al emitir diversas resoluciones que han resuelto procedimientos ordinarios sancionadores por indebidas afiliaciones y, que además han sido confirmadas por la *Sala Superior*, como son: INE/CG444/2018, confirmada a través del **SUP-RAP-138/2018**; INE/CG448/2018, confirmada en el **SUP-RAP-137/2018**; INE/CG446/2018, confirmada a través del **SUP-RAP-141/2018**, e INE/CG537/2018, confirmada en el **SUP-RAP-170/2018**, entre otras.

D) El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la infracción

Se estima que la infracción cometida por parte del partido político *MC*, aun cuando causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de la infracción.

E) Las condiciones socioeconómicas del infractor

Sobre este punto, es preciso señalar que conforme al Acuerdo INE/CG339/2017, emitido por este *Consejo General* el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se estableció que, entre otros, el partido político *MC* recibiría mensualmente en el presente ejercicio, por concepto de financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes, la siguiente cantidad:

SUJETO	Monto del financiamiento público para el sostenimiento de Actividades Ordinarias mensuales de 2018
<i>MC</i>	\$28'465,342

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/VPC/CG/116/2018

Ahora bien, según fue informado por la *DEPPP*, a través del oficio **INE/DEPPP/DE/DPPF/5693/2018**, el monto de la ministración mensual correspondiente al mes de septiembre de dos mil dieciocho, debía ser ajustado en función de las sanciones administrativas pendientes de cubrir por dicho instituto político nacional, por lo cual la cifra total a recibir sería la siguiente:

SUJETO	IMPORTE DE LA MINISTRACIÓN DE MENSUAL DE 2018	IMPORTE TOTAL DE LAS SANCIONES SEPTIEMBRE 2018	IMPORTE NETO DE LA MINISTRACIÓN
<i>MC</i>	\$28'465,342	\$14,028,287.00	\$14'437,055.00

F) Impacto en las actividades del sujeto infractor

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta al partido político *MC*, no es de carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida, respecto al monto del financiamiento que recibirá por concepto de actividades ordinarias permanentes en el mes de septiembre del año en curso, ya que corresponde al **%0.35** de su ministración mensual.

Por consiguiente, la sanción impuesta al partido *MC* no es de carácter gravoso, si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual correspondiente al mes de septiembre de este año.

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción cometida por el partido político *MC* (especialmente los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con el financiamiento que recibe del *INE* para el mes de septiembre de dos mil dieciocho, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno

se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político sancionado.

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el partido político de mérito —tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagar sin que ello afecte sus operaciones ordinarias, además de que las sanciones son proporcionales a las faltas cometidas y se estima que, sin resultar excesivas ni ruinosas, pueden generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la *Sala Superior* en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-250/2009,⁴¹ es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

QUINTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE LAS QUEJOSAS COMO MILITANTES.

Con la finalidad de lograr el respeto al derecho de libre afiliación, lo procedente es ordenar al instituto político denunciado que, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución**, en el supuesto que las quejas continúen en su padrón de afiliados, **sin mayor trámite**, cancele el registro de cada una de ellas como sus militantes, con efectos a partir de la fecha de presentación de sus respectivas denuncias y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la *UTCE*, las pruebas que amparen el cumplimiento.

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la *Sala Superior* en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017,⁴² de cinco de enero del año en curso, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el *INE*, que lo vincule con un instituto político en particular.

⁴¹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm>

⁴² Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/JDC/2/SUP_2017_JDC_2-626321.pdf

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN.

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17, de la *Constitución Federal*,⁴³ se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el numeral 42 de la *Ley de Medios*, así como a través del juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previsto en el artículo 79 del referido ordenamiento legal, para el caso de los denunciantes.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO. Se declara **infundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra del partido político **MC**, al no infringir las disposiciones electorales de libre afiliación de **Victoria Pérez Clavel** y **Patricia Lara Celestino**, en términos de lo establecido en el numeral 5, Apartado A, del Considerando **TERCERO** de esta Resolución.

SEGUNDO. Se declara **fundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra del partido político **MC** al infringir las disposiciones electorales de libre afiliación de **Juana López López**, en términos de lo establecido en el numeral 5, Apartado B, del Considerando **TERCERO** de esta Resolución.

⁴³ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.**”

TERCERO. En términos del Considerando **CUARTO** de la presente Resolución, se impone al partido político **MC**, una multa de **642 (Seiscientos cuarenta y dos)** Unidades de Medida y Actualización, que da la cantidad de **\$51,745.20 (Cincuenta y un mil, setecientos cuarenta y cinco pesos 20/100 M.N.)**, por la indebida afiliación de Juana López López.

CUARTO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7, de la *LG/PE*, el monto de la multa impuesta al partido político **MC**, será deducido de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su Considerando CUARTO.

QUINTO. Se ordena al partido político **MC** para que, de ser el caso que las quejas continúen en su padrón de afiliados, **sin mayor trámite**, cancele el registro de cada una de ellos como sus militantes, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución**, con efectos a partir de la fecha de presentación de sus respectivas denuncias y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP* del *INE*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la *UTCE*, las pruebas que amparen el cumplimiento, a fin de vigilar y corroborar el cumplimiento por parte del referido ente político, conforme a lo dispuesto en su Considerando QUINTO.

SEXTO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42, de la *Ley de Medios*, así como a través del juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previsto en el artículo 79 del referido ordenamiento legal, para el caso de los denunciantes.

Notifíquese personalmente a las siguientes ciudadanas:

No.	Quejoso
1	Patricia Lara Celestino
2	Juana López López
3	Victoria Pérez Clavel

Por **oficio**, al **partido político MC**, por conducto de su respectivo representante ante este *Consejo General*; y por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1238/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ORDINARIO
DENUNCIANTE: JUAN BERNARDO
BALANZAR JACOBO
DENUNCIADO: PARTIDO DEL TRABAJO

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/JBBJ/JD03/GRO/205/2018, INICIADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR JUAN BERNARDO BALANZAR JACOBO, EN CONTRA DEL PARTIDO DEL TRABAJO, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA PROBABLE VIOLACIÓN A SU DERECHO DE LIBERTAD DE AFILIACIÓN DE DICHO CIUDADANO QUE ASPIRABA AL CARGO DE CAPACITADOR ASISTENTE ELECTORAL Y, EN SU CASO, LA UTILIZACIÓN INDEBIDA DE SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 12 de septiembre de dos mil dieciocho.

G L O S A R I O

COFIPE	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Comisión:	La Comisión de Quejas y Denuncias del INE
Consejo General:	Consejo General del INE
Constitución:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DEPPP:	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE

<i>DERFE:</i>	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE
<i>IFE:</i>	El otrora Instituto Federal Electoral
<i>Instituto o INE:</i>	Instituto Nacional Electoral
<i>Ley de Medios:</i>	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
<i>Ley de Partidos:</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>LGIPE:</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>PT:</i>	Partido del Trabajo
<i>Quejoso o denunciante:</i>	Juan Bernardo Balanzar Jacobo
<i>Reglamento de Quejas:</i>	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>Sala Superior:</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>UTCE:</i>	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE

R E S U L T A N D O

I. PRESENTACIÓN DE LA QUEJA. El veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, se recibió en la *UTCE* del *INE*, el oficio INE/JDE03/VED/275/2018, firmado por la Vocal Ejecutiva de la 03 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en el estado de Guerrero, mediante el cual remiten el escrito¹ de queja firmado por Juan Bernardo

¹ Visible a fojas 7 a 10.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBBJ/JD03/GRO/205/2018

Balazar Jacobo, a través del cual denunció que supuestamente fue afiliado de manera indebida al padrón de militantes del *PT*, y que, para ello, presuntamente se utilizaron sus datos personales sin su autorización.

II. REGISTRO, ADMISIÓN Y RESERVA DE EMPLAZAMIENTO. El nueve de julio del año en curso,² el Titular de la *UTCE* instruyó la integración del expediente en que se actúa, el cual quedó registrado con la clave **UT/SCG/Q/JBBJ/JD03/GRO/205/2018**, como un procedimiento sancionador ordinario por la presunta indebida afiliación y el uso indebido de datos personales para ese fin.

En el acuerdo en cita, se admitió a trámite el procedimiento sancionador ordinario señalado con anterioridad y se ordenó reservar lo conducente respecto al emplazamiento, hasta en tanto concluyeran las diligencias de investigación ahí ordenadas.

Al respecto, debe precisarse que la indagatoria ordenada consistió en solicitar a la *DEPPP* informara si el *quejoso* se encontraba registrado dentro del padrón de afiliados del *PT* y, de ser el caso, proporcionara la fecha de tal afiliación; asimismo, se le requirió al citado instituto político para que informara si el referido ciudadano aparecía en su padrón de afiliados y, de ser el caso, remitiera copia certificada de las constancias en las que constara el consentimiento del *denunciante*, respecto de la afiliación materia de controversia.

Enseguida se da cuenta de las constancias aportadas en relación con tales requerimientos.

Respuesta de la *DEPPP*:³

Fecha de acuerdo	Oficio <i>UTCE</i>	Respuesta
09/07/2018	INE-UT/11469/2018	No se encuentra como registro valido del padrón de afiliados del <i>PT</i> , no obstante, se localizó una coincidencia dentro dicho padrón, con fecha de afiliación de 03/02/2014

² Visible a fojas 11 a 17.

³ Visible a fojas 25 y 26.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBBJ/JD03/GRO/205/2018

Respuesta del PT.⁴

Fecha de acuerdo	Oficio UTCE	Respuesta
09/07/2018	INE-UT/11468/2018	Afiliado al PT desde el 2014 Anexó copia certificada de la solicitud de afiliación

III. EMPLAZAMIENTO. El diecisiete de julio del año en curso,⁵ se ordenó el emplazamiento al PT, para efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de la conducta que se le imputó y aportara las pruebas que considerara pertinentes.

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

EMPLAZAMIENTO				
CONSTANCIA CON LA CUAL SE MATERIALIZÓ LA DILIGENCIA	SUJETO EMPLAZADO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE CONTESTACIÓN AL EMPLAZAMIENTO	PRUEBAS OFRECIDAS
INE-UT/11740/2018 ⁶	PT	19/julio/18	26/julio/18 Mediante oficio REP-PT-INE-PVG-335/2018, el representante propietario de dicho partido dio respuesta al emplazamiento ⁷ .	Instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, ambas en todo lo que favorezca a sus intereses y pretensiones.

IV. ALEGATOS. El tres de agosto de dos mil dieciocho,⁸ se ordenó dar vista a las partes, a efecto de que en vía de alegatos manifestaran lo que a su derecho conviniera, asimismo, se ordenó dar vista al quejoso con el formato de afiliación, aportado por el partido político, mediante el cual intentó acreditar que la afiliación controvertida se realizó de conformidad con las disposiciones legales.

El acuerdo de vista para alegatos, se diligenció en los siguientes términos:

⁴ Visible a fojas 31 a 34.

⁵ Visible a fojas 35 a 40.

⁶ Visible a foja 46.

⁷ Visible a fojas 58 a 59.

⁸ Visible a fojas 60 a 63.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBBJ/JD03/GRO/205/2018

CONSTANCIA CON LA CUAL SE MATERIALIZÓ LA DILIGENCIA	SUJETO NOTIFICADO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE CONTESTACIÓN
INE-UT/12238/2018 ⁹	PT	06 de agosto de 2018	13/agosto/18 Mediante oficio REP-PT-INE-PVG-403/2018, el representante propietario de dicho partido dio respuesta a la vista de alegatos ¹⁰ .
INE/12JDE/VE/618/2018 ¹¹	Juan Bernardo Balazar Jacobo	07 de agosto de 2018	No da respuesta

V. ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, toda vez que no había diligencias pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la *Comisión*.

VI. SESIÓN DE LA COMISIÓN. En la Octogésima Cuarta Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el seis de septiembre de dos mil dieciocho, la *Comisión de Quejas* analizó y aprobó el proyecto de mérito, por unanimidad de votos de sus integrantes; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto de análisis en el presente procedimiento sancionador, consiste en la presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 341, párrafo 1, inciso a), y 342, párrafo 1, incisos a) y n), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;¹² 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b); 3,

⁹ Visible a foja 68.

¹⁰ Visible a foja 72 a 79.

¹¹ Visible a foja 80.

¹² De la interpretación sistemática, funcional y armónica de los artículos Tercero y Sexto Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en consonancia con la Jurisprudencia de rubro y contenido siguientes: "**RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES**, lo procedente es que, al haber sido cometidos los hechos antes del **veintitrés**

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBBJ/JD03/GRO/205/2018

párrafo 2; 25, párrafo 1, incisos a), e) y u), y 29 de la Ley de Partidos, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte del *PT*, en perjuicio de Juan Bernardo Balanzar Jacobo.

Ahora bien, conforme al artículo 44 párrafo 1, inciso j) de la *LGIPE*, los partidos políticos deben ajustar su conducta a las disposiciones establecidas en la normatividad electoral, correspondiendo al *INE* vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la Ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 442, párrafo 1, inciso a); 443, párrafo 1, incisos a) y n), y 456, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho ordenamiento jurídico, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 25, párrafo 1, incisos a), e), y u), y 29 de la Ley de Partidos, así como la infracción a los derechos contenidos en los numerales 2, párrafo 1, inciso b), y 3, párrafo 2, del mismo ordenamiento jurídico, las cuales son sancionables por el *Consejo General*.

En consecuencia, toda vez que corresponde a este órgano superior de dirección conocer de las infracciones a la normatividad electoral y, en su caso, imponer las sanciones atinentes, en el particular, esta autoridad resulta competente para conocer y resolver respecto de la infracción denunciada, atribuida al *PT*, consistente, en esencia, en la presunta violación al derecho de libertad de afiliación y utilización indebida de datos personales.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,¹³ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.

de mayo de dos mil catorce, esto es, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la legislación comicial aplicable para el trámite del presente asunto será el **Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales**. Ahora bien, respecto a las reglas procedimentales que regirán para la sustanciación del presente procedimiento, serán aplicables las contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al no contener disposición alguna en perjuicio de las partes.

¹³ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de militantes.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIFE*, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, segundo párrafo, de la *Constitución*, es decir, con base en el derecho humano a la libre asociación en su vertiente de afiliación política.

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO

En el presente asunto se debe subrayar que la presunta violación al derecho de libre afiliación se cometió **durante la vigencia del COFIPE**, puesto que el registro o afiliación del ciudadano Juan Bernardo Balanzar Jacobo al *PT*, de conformidad con las documentales que obran en el expediente vitado al rubro, se realizó el tres de febrero de dos mil catorce, fecha en la cual se encontraba vigente dicho Código.¹⁴

Por tanto, si al momento de la comisión de las presuntas faltas se encontraba vigente el *COFIPE*, es claro que este ordenamiento legal debe aplicarse para las cuestiones sustantivas del presente procedimiento, al margen que las faltas pudieran haber sido advertidas por el quejoso y cuestionadas mediante la queja que dio origen al presente asunto, una vez que dicha norma fue abrogada por la *LGIFE*, así como que este último ordenamiento sea fundamento para cuestiones procesales o adjetivas.

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO

Como ha quedado dicho, el presente asunto derivó de la queja presentada por un ciudadano en contra del *PT*, debido, a que dicho partido político afilió al quejoso sin

¹⁴ El *COFIPE* estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce.

que éste prestara su consentimiento para ello, haciendo para conseguirlo, uso indebido de sus datos personales.

1. EXCEPCIONES Y DEFENSAS

En defensa de sus intereses, el *PT* manifestó, en esencia, que Juan Bernardo Balazar Jacobo, se encuentra afiliado de forma voluntaria, lo anterior, se acredita con la copia certificada de su formato de afiliación, en la que consta su firma autógrafa como prueba de su manifestación libre y autentica de afiliarse por su propio derecho en el año 2014.

Como se observa, las manifestaciones formuladas por el denunciado en defensa de sus intereses tienen que ver con la materia de la controversia y no con cuestiones de índole procesal, que impliquen una cuestión de previo y especial pronunciamiento, razón por la cual serán estudiadas al resolver el caso concreto.

2. FIJACIÓN DE LA LITIS

En el presente asunto se debe determinar si el *PT* afilió indebidamente o no al ciudadano que alega no haber dado su consentimiento para estar en sus filas, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIFE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *Ley de Partidos*.

3. MARCO NORMATIVO

A) Constitución, Tratados Internacionales y Ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: ...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

...

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un

sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia **24/2002**, emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES**.¹⁵

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,¹⁶ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos

¹⁵ Consultable en la página: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

¹⁶ Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

electorales, se encuentra consagrado a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes —asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de

certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

*“**Artículo 23.** Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:*

I...

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.”

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa

de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que, en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;
- Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
- Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGPE*, que es obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* del *IFE* por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *H. Sala Superior* en el expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBBJ/JD03/GRO/205/2018

SUP-RAP-570/2011, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su constitución y registro.

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.
- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.

- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que, en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cuál, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna del PT

A efecto de tener claridad acerca del proceso que un ciudadano debe llevar a cabo para convertirse en militante del partido político ahora denunciado, se hace necesario analizar la norma interna del partido político, para lo cual, enseguida se transcribe la parte conducente de los Estatutos del PT¹⁷

CAPÍTULO IV.

DE LOS MILITANTES, AFILIADOS Y SIMPATIZANTES.

Artículo 14. Son militantes del Partido del Trabajo, los mexicanos, mujeres y hombres, que acepten y suscriban los Documentos Básicos y sus políticas específicas. Deberán participar activa y permanentemente en una instancia del Partido del Trabajo y en una organización social y sus luchas. Deberán aplicar las líneas políticas del Partido, actuar con honestidad y disciplina y pugnar por conservar su unidad. Por tratarse de un Instituto Político Nacional, en el cual sus militantes, afiliados

¹⁷ http://partidodeltrabajo.org.mx/2011/portal_transparencia/art76/XIV/10.pdf

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBBJ/JD03/GRO/205/2018

y simpatizantes **participan en forma personal y voluntaria**, además que el ejercicio de sus actividades políticas se encuentran consideradas en el artículo 35 Constitucional, como prerrogativas de los ciudadanos; en consecuencia, en ningún momento la militancia de los mismos en el Partido del Trabajo, generará derechos laborales.

Artículo 15. Son derechos de los militantes del Partido del Trabajo:

- a) Votar y ser votados para todos los Órganos de Dirección, demás Órganos del Partido en todos los niveles y para todas las Comisiones que integran sus estructuras orgánicas, cuando cumplan los requisitos estatutarios para ello.
- b) Votar y ser votados como candidatos del Partido del Trabajo a los cargos de elección popular.
- c) Discutir, proponer y votar libremente en torno a las líneas generales del trabajo de masas, ideológico, teórico, político y organizativo del Partido, en las instancias respectivas.
- d) Recibir la orientación por las instancias partidarias respectivas, para realizar su trabajo entre las masas y su trabajo partidario.
- e) Recibir el apoyo necesario en el cumplimiento de sus tareas de acuerdo a las posibilidades del Partido. Ser informado de las actividades del Partido del Trabajo en todas sus instancias y regiones, a excepción de los problemas que por su propia naturaleza delicada, deben tratarse con reserva y discreción.
- f) Manifestar y sostener sus puntos de vista, en todas las instancias del Partido y formar parte de corrientes de opinión, respetando la normatividad estatutaria y no cayendo en prácticas divisionistas.
- g) Recibir el apoyo del Partido del Trabajo para su formación teórico política, participando en el Sistema Nacional de Escuelas de Cuadros del Partido, asistiendo a los cursos de formación que las diversas instancias de éste organicen o a cualquier evento de formación organizado por el Partido del Trabajo.
- h) Ser designados para representar al Partido del Trabajo en los diferentes foros nacionales e internacionales.
- i) Ser promovido, en forma justa y equitativa, recibir estímulos y reconocimientos del Partido del Trabajo cuando destaque por su trabajo realizado.
- j) Expresar sus puntos de vista libremente con un afán constructivo y propositivo en los periódicos y revistas del Partido del Trabajo.
- k) Libertad para hacer propuestas, emitir opiniones, para realizar críticas y autocríticas y tendrán derecho a ser escuchados en todas las instancias del Partido del Trabajo.

Artículo 16. Son obligaciones de los militantes:

- a) Participar en una instancia de base del Partido del Trabajo e informar periódicamente de sus actividades a la dirección o las direcciones correspondientes.
- b) Participar activa y permanentemente en una organización social.
- c) Acatar los resolutivos de los Congresos y demás instancias del Partido del Trabajo y llevar a la práctica sus líneas generales.
- d) Cumplir con las tareas que le sean encomendadas por las organizaciones sociales y por el Partido del Trabajo, en sus diversas instancias.
- e) Respetar la estructura orgánica del Partido del Trabajo, obedecer su disciplina y acatar sus Órganos de Dirección.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBBJ/JD03/GRO/205/2018

- f) *Preservar la unidad del Partido del Trabajo.*
- g) *Defender al Partido del Trabajo en todo lugar y momento.*
- h) *Cuidar de los recursos financieros, materiales, bienes muebles e inmuebles del Partido del Trabajo que estén bajo su responsabilidad y firmar los resguardos correspondientes. Dar cuenta del destino de los mismos y en su caso, reintegrarlos de inmediato en buen estado cuando le sean requeridos por las instancias partidarias. En caso de incumplimiento o negativa se procederá judicialmente en su contra, por parte de la instancia correspondiente o por parte de las instancias superiores del Partido. Estas obligaciones se hacen extensivas para los afiliados y simpatizantes del Partido del Trabajo.*
- i) *En su caso, pagar la cuota que le corresponda.*
- j) *No dirimir conflictos intrapartidarios en los medios de comunicación externos.*
- k) *Los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional, de la Comisión Coordinadora Nacional, los Comisionados Políticos Nacionales y demás Órganos Nacionales del Partido; de las Comisiones Ejecutivas Estatales o del Distrito Federal, de la Comisión Coordinadora Estatal o del Distrito Federal y los que ocupen un cargo de responsabilidad pública y representación popular, deberán entregar su declaración patrimonial ante la Comisión Nacional de Contraloría y Fiscalización, a más tardar dos meses después de su elección o nombramiento.*
- l) *Los militantes y afiliados que ocupen cargos de representación popular y de servidores públicos, deberán comprometerse a aportar las cuotas al Partido del Trabajo de acuerdo a los siguientes criterios:*
 - I. Se entiende por percepciones: los sueldos, salarios, dietas y honorarios netos.*
 - II. Las cuotas que se recauden por este concepto se destinarán al Sistema Nacional de Escuelas de Cuadros, cuando éstas provengan del ámbito Federal y para las escuelas Estatales cuando provengan del ámbito Estatal o del Distrito Federal y Municipal o Delegacional. Cuando exista escuela de cuadros Municipal, los ingresos se entregarán en ese ámbito. Los criterios anteriores se presentan en el siguiente tabulador:*

PERCEPCIÓN CUOTA
Hasta 5 salarios mínimos mensuales: 2%
De 6 hasta 12 salarios mínimos mensuales: 5%
De 13 hasta 30 salarios mínimos mensuales: 10%
De 31 hasta 42 salarios mínimos mensuales: 15%
De 43 salarios mínimos mensuales en adelante: 20%

Quienes no cumplan con lo anterior, serán acreedores a las sanciones que establecen el artículo 115 de los presentes Estatutos, de conformidad con las resoluciones que emitan las instancias internas encargados de dirimir conflictos.
- m) *Aplicar la Línea de Masas para todo trabajo que se realice.*
- n) *Educarse teórica y políticamente en el Sistema Nacional de Escuelas de Cuadros del Partido del Trabajo.*
- o) *No permitir ni propiciar la injerencia del Estado en la vida del Partido del Trabajo.*

Artículo 17. *Son afiliados al Partido del Trabajo los mexicanos mujeres y hombres que acepten la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos y colaboren con algunas tareas del Partido, especialmente las electorales. Sus derechos son:*

- a) *Votar y ser votados para ocupar los Órganos de Dirección demás Órganos del Partido en todos los niveles y para todas las Comisiones que integran sus estructuras orgánicas, cuando cumplan los requisitos estatutarios para ello.*
- b) *Votar y ser votados como candidatos del Partido del Trabajo a los cargos de elección popular.*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBBJ/JD03/GRO/205/2018

- c) Presentar propuestas a las diferentes instancias del Partido del Trabajo sobre aspectos políticos, electorales, organizativos y de lucha de masas.*
- d) Capacitarse teórica y políticamente en las Escuelas de Cuadros.*
- e) Conocer y discutir los documentos públicos e internos del Partido del Trabajo.*
- f) Recibir orientación para realizar su trabajo entre las masas y ser informado de las actividades del Partido del Trabajo en todas sus instancias. Se excluyen un reducido número de problemas que por su naturaleza delicada no pueden informarse abiertamente.*
- g) Manifestar y sostener sus puntos de vista en todas las instancias del Partido del Trabajo y formar parte de corrientes de opinión, respetando la normatividad estatutaria, y no cayendo en prácticas divisionistas.*
- h) Los afiliados podrán estar incorporados en algún organismo de base del Partido del Trabajo.*
- i) Manifestar sus puntos de vista a nivel personal sin involucrar al Partido del Trabajo en su conjunto.*

Artículo 18. *Son obligaciones de los afiliados:*

- a) Aceptar los Documentos Básicos.*
- b) Acatar y practicar la línea política, acuerdos y resoluciones del Partido del Trabajo.*
- c) Educarse teórica y políticamente en el sistema Nacional de Escuelas de Cuadros del Partido del Trabajo y estar actualizado de la situación local, nacional e internacional.*
- d) Aplicar la Línea de Masas para todo trabajo que se realice.*
- e) Participar en algún nivel de trabajo partidario y además en las organizaciones sociales o en algunas franjas de la sociedad.*
- f) Aportar las cuotas establecidas por la instancia del Partido del Trabajo donde se participe.*
- g) Los afiliados deberán promover la afiliación permanente en lo individual de personas al Partido del Trabajo y el ingreso formal será revisado por los organismos de dirección correspondientes cuando se considere pertinente.*
- h) Cumplir con los compromisos contraídos con el Partido del Trabajo y las organizaciones sociales.*
- i) Promover el voto en los distintos procesos electorales de nuestra opción partidaria.*
- j) No dirimir conflictos intrapartidarios en los medios de comunicación externos.*
- k) No permitir ni propiciar la injerencia del Estado en la vida del Partido del Trabajo.*
- l) Cotizar al Partido en los términos que establece el Artículo 16 Inciso l); de los presentes Estatutos.*

Artículo 19. *Son simpatizantes aquellas personas que se identifiquen con el proyecto general del Partido del Trabajo, con su lucha social, política, electoral y ciudadana y promuevan el voto por nuestra opción partidaria.*

Artículo 20. *Los simpatizantes del Partido del Trabajo participarán principalmente en la lucha electoral, ciudadana, sectorial y social. Colaborarán en aspectos financieros, de infraestructura y en cualquier apoyo en general. Los simpatizantes tendrán los siguientes derechos:*

- a) Conocer las líneas fundamentales de nuestro trabajo político, así como la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos de nuestro Partido.*
- b) Conocer nuestra política para cada sector del pueblo.*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBBJ/JD03/GRO/205/2018

c) Libertad para emitir opiniones y críticas. Las Comisiones Ejecutivas Municipales o Delegacionales aceptarán la solicitud de ingreso de los simpatizantes, en su calidad de afiliados. En caso de negativa, las solicitudes se podrán hacer ante las Comisiones Ejecutivas Estatales, del Distrito Federal, o ante la Comisión Ejecutiva Nacional.

Artículo 21. Son obligaciones de los simpatizantes: a) Conocer nuestra línea política y Documentos Básicos.

b) Promover el voto a favor de nuestro Partido.

c) Participar en los actos más relevantes del Partido del Trabajo. d) No dirimir conflictos intrapartidarios en los medios de comunicación.

CAPÍTULO V.

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INGRESO.

Artículo 22. *Los requisitos de ingreso de los afiliados al Partido del Trabajo son:*

a) Estar comprometido en la lucha del pueblo mexicano.

b) Conocer la línea del Partido del Trabajo y coincidir con ella, así como con sus Documentos Básicos.

c) No militar en otra organización partidaria nacional o antagónica al Partido del Trabajo.

d) Presentar una solicitud de afiliación por escrito, a la instancia partidaria correspondiente.

e) Cubiertos los requisitos, el Partido del Trabajo podrá aceptar la solicitud de ingreso y emitir la constancia de afiliación.

f) En caso de que la constancia de ingreso respectiva de afiliados, simpatizantes y militantes no sea emitida por la instancia correspondiente, en un plazo de 30 días, ésta se dará por aceptada. Los afiliados podrán ser promovidos a militantes.

...

De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente:

- Para militar en el *PT*, los mexicanos, mujeres y hombres, deberán aceptar y suscribir los Documentos Básicos y sus políticas específicas.
- Para estar afiliado al *PT*, los mexicanos mujeres y hombres deberán aceptar la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos y deberán de colaborar con algunas tareas del Partido, especialmente las electorales.
- Uno de los requisitos formales para afiliarse al *PT*, consiste en presentar una solicitud de afiliación por escrito, a la instancia partidaria correspondiente.

D) Protección de datos personales

De los artículos 6, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

E) Carga y estándar probatorio sobre indebida afiliación a un partido político

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante del *PT*, por regla general debe acudir a las instancias partidistas competentes, **suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación**, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso particular el *PT*), **tienen la carga de conservar y resguardar**, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliados al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 párrafo 1, inciso c), de la *Ley de Partidos*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBBJ/JD03/GRO/205/2018

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de las constancias idóneas para ese fin, y que los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos con esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y voluntaria.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la Sala Superior, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**,¹⁸ donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Jurisprudencia 21/2013, de rubro: **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,¹⁹ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria²⁰ y como estándar probatorio²¹.

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación²² ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la Sala Superior consideró en la sentencia referida que, para superar la presunción de inocencia, en su

¹⁸ http://www.te.gob.mx/Informacion_judiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

¹⁹ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60

²⁰ Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

²¹ Véase la jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. ²² Véase la nota 35.

²² Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO**.

vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la *Ley de Medios*, con fundamento en el diverso 441 de la *LGIPE*, lo que implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera **idónea** demuestra que una persona está afiliado voluntariamente a un partido **es la constancia de inscripción respectiva**, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento sancionador ordinario, una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino que conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

Al respecto, la Sala Superior sostuvo que **si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante**, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales **que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo**; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que **de manera insuperable** el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad de conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se

genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

Otro aspecto importante a tomar en consideración, radica en que, si el partido político cumple con la carga probatoria que corresponde a su afirmación en el sentido de que la afiliación cuestionada estuvo precedida del consentimiento del quejoso, es decir, si exhibe prueba suficiente sobre la legitimidad de la afiliación motivo de queja, debe considerarse que prevalece el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio.

Al respecto, cabe destacar que, si la autenticidad o el contenido de dicho documento es cuestionado por el quejoso, se debe estar a las disposiciones contenidas en la *LGIPE* y el *Reglamento de Quejas y Denuncias*, las cuales aluden a las reglas que deben observarse tratándose de la objeción de documentos, como parte del derecho contradictorio que les asiste a las partes, de oponerse o refutar las pruebas que ofrezcan o que se allegue la *UTCE* durante la secuela de un procedimiento ordinario sancionador.

Así, el artículo 24 del citado cuerpo normativo establece que:

- 1. Las partes podrán objetar las pruebas ofrecidas durante la sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores **ordinario** y especial, siempre y cuando se realice antes de la audiencia de desahogo.*
- 2. Para los efectos de lo señalado en el párrafo que antecede, las partes podrán objetar la autenticidad de la prueba o bien su alcance y valor probatorio **debiendo indicar** cuál es el aspecto que no se reconoce de la prueba o por qué no puede ser valorado positivamente por la autoridad, esto es, el motivo por el que a su juicio no resulta idóneo para resolver un punto de hecho.*
- 3. Para desvirtuar la existencia o verosimilitud de los medios probatorios ofrecidos, no basta la simple objeción formal de dichas pruebas, sino que es necesario señalar las razones correctas en que se apoya la objeción **y aportar***

elementos idóneos para acreditarlas, mismos que tenderán a invalidar la fuerza probatoria de la prueba objetada.

Énfasis añadido

Esto es, de conformidad con el precepto reglamentario previamente transcrito, **no basta con objetar de manera formal el medio de prueba ofrecido por el partido político para desvirtuar la existencia o verosimilitud de la constancia de afiliación, sino que es necesario señalar las razones correctas en que se apoya la objeción y, también, aportar en el momento procesal oportuno, los elementos idóneos para acreditar su objeción.**

Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia 4/2005²³ de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes:

DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y PUEBLA, ESTA ÚLTIMA ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1998). En términos de lo dispuesto por los artículos 324 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 330 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, los documentos privados provenientes de las partes deben ser reconocidos expresa o tácitamente para que adquieran el valor probatorio que las propias legislaciones les otorgan. Ahora bien, ***esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio reiterado de que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que es necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción.*** Debido a que en las legislaciones adjetivas en cuestión no se establece ninguna regla específica sobre la carga probatoria en la hipótesis apuntada, para saber a quién corresponde dicha carga de la prueba sobre la objeción formulada, deben atenderse los hechos en que se funde la misma, aplicándose las reglas genéricas establecidas en los artículos 289 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 263 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, en cuanto a que ***a cada parte corresponde probar los hechos de sus pretensiones. Por tanto, si la objeción de un documento privado proveniente de los interesados base de sus pretensiones se funda en la circunstancia de no haber suscrito el documento el objetante, a él corresponde la carga de la prueba. Dicho de otra forma, quien invoca una situación jurídica está obligado a probar los hechos fundatorios en que aquélla descansa; por lo contrario, quien sólo quiere que las cosas***

²³ Jurisprudencia 1a./J. 4/2005, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Página 266.

se mantengan en el estado que existen en el momento en que se inicia el juicio, no tiene la carga de la prueba, pues desde el punto de vista racional y de la lógica es evidente que quien pretende innovar y cambiar una situación actual, debe soportar la carga de la prueba.

Énfasis añadido

Bajo ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió, en concordancia con los preceptos invocados en líneas que anteceden, que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que debe ser necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción, es decir, que al objetante corresponde la carga de la prueba. A efecto de robustecer lo anterior, se citan criterios de diversos Tribunales Colegiados de Circuito, en los que se han pronunciado en tal sentido sobre el tema:

- ***DOCUMENTOS PRIVADOS. OBJECCIÓN A LOS.***²⁴
- ***DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. CONFORME AL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA.***²⁵
- ***DOCUMENTOS PRIVADOS. PARA NEGARLES VALOR PROBATORIO, NO BASTA LA SIMPLE OBJECCIÓN, SINO QUE DEBEN SEÑALARSE LAS CAUSAS EN QUE LA FUNDE Y DEMOSTRARLAS.***²⁶
- ***DOCUMENTOS PRIVADOS, CARGA DE LA PRUEBA EN CASO DE OBJECCIÓN A LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)***²⁷

²⁴ Jurisprudencia I.30c. J/8, Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, Página 423.

²⁵ Tesis Aislada XV.4o.12 C, Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, Página 3128.

²⁶ Jurisprudencia III. 10c. J/17, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Número 63, Marzo de 1993, Página 46.

²⁷ Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Agosto de 1993, Página 422.

- **DOCUMENTOS PRIVADOS. CARGA DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR LA OBJECCIÓN RESPECTO DE LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA CONTENIDA EN ELLOS**²⁸
- **DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)**²⁹

De igual forma, resulta aplicable la Jurisprudencia I.3o.C. J/11³⁰, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes:

DOCUMENTOS PRIVADOS INSUFICIENTEMENTE OBJETADOS POR EL PROPIO FIRMANTE, VALOR PROBATORIO DE LOS. *En tratándose de documentos privados, debe hacerse la distinción entre aquellos que provienen de terceras personas y los que se atribuyen a las partes litigantes en la controversia. Respecto de los primeros, basta la objeción del instrumento privado, debidamente razonada, para que pierda su valor probatorio, quedando a cargo del oferente la carga de la prueba y apoyar su contenido aportando otros elementos de convicción, y en relación con el segundo supuesto, para tener por satisfecho lo dispuesto por el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es menester que **la parte a quien perjudique realice en tiempo, forma y suficiencia la objeción, para que pierda su alcance probatorio dicho instrumento. De esta manera, se tiene que si en un caso la contraparte del oferente, al dársele vista con el documento exhibido, se limitó a manifestar que no lo había firmado, tal aseveración no pudo constituir la causa suficiente de objeción que demeritara el alcance de esa probanza, ya que para tal efecto resulta indispensable que existan causas motivadoras de la invalidez de la prueba y que se aportaran las pruebas idóneas para tal fin, como pudieron ser las periciales grafoscópicas, grafológicas y caligráficas; elementos que no se rindieron para acreditar la impugnación, como lo dispone el artículo 341 del código citado.***

Énfasis añadido

²⁸ Tesis XXXI.3º 8 L, Tercer Tribunal Colegiado de Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, Página 1254.

²⁹ Tesis II. o C, 495 C, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Página 1454.

³⁰ Tesis I.3o. C J/11, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de 1997, Página 615.

En igual sentido, el Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito en la Jurisprudencia III.1o.C. J/29³¹, sostuvo el referido criterio en el siguiente sentido:

DOCUMENTOS PRIVADOS, PRUEBA DE LA FALSEDAD DE LA FIRMA DE LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Una interpretación armónica de los artículos 342, 343, 344, 345, 346 y 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, lleva a concluir que cuando se objeta la autenticidad de la firma de un documento privado es necesario pedir el cotejo de la misma con una señalada como indubitable; además, debe ofrecerse la prueba pericial respectiva, dado que la falsificación de la firma es un punto que sólo puede ser determinado por una persona con conocimientos especiales en la materia, es decir, por un perito grafógrafo, aun cuando exista diferencia notoria entre las firmas cuestionadas, porque tal circunstancia, por sí sola, no revela lo apócrifo de una de ellas, sino únicamente la diferencia entre ambas.

Énfasis añadido

Lo anterior, en suma, significa que para desvirtuar la presunción de inocencia que surge en favor del denunciado cuando aporta elementos de prueba idóneos para demostrar que la afiliación cuestionada estuvo precedida de la manifestación de voluntad del quejoso, tal como las constancias de afiliación correspondientes, o bien, elementos que pongan de manifiesto que el quejoso realizó hechos positivos derivados de su militancia, no basta que, de manera abstracta y genérica, el quejoso afirme que dichos medios de convicción no son veraces o auténticos.

Lo anterior, atento que, conforme a la normatividad que rige los procedimientos sancionadores electorales y que inexcusablemente está obligado a seguir este Consejo General, resulta imperativo que quien objeta un medio de prueba, señale específicamente cuál es la parte que cuestiona, y al efecto aporte, o cuando menos señale, conforme a la regla general relativa a que a quien afirma le corresponde probar —vigente en los procedimientos sancionadores electorales conforme a lo establecido por la Sala Superior—, los elementos objetivos y ciertos que puedan conducir a destruir la eficacia probatoria de los elementos aportados por el denunciado en su defensa, pues de otra manera, el principio de presunción de inocencia deberá prevalecer apoyado en las evidencias allegadas al procedimiento por el presunto responsable.

³¹ Jurisprudencia III.1o.C. J/29, Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Página 680.

4. HECHOS ACREDITADOS Y PRECISIONES

En principio, es importante considerar que la responsabilidad administrativa atribuida al infractor de una norma electoral, debe estar sustentada en dos principios que constituyen la base objetiva de todo procedimiento sancionador: por un lado, la existencia fáctica de la conducta prevista como falta en la norma; y por otro, la responsabilidad del sujeto a quien se le atribuye dicha conducta, esto es, el nexo causal que debe quedar demostrado entre la realización de la conducta infractora y la responsabilidad en su comisión por el presunto infractor.

Así, a efecto de determinar la legalidad o ilegalidad de los hechos cuestionados y la responsabilidad atribuida al partido denunciado, se verificará en principio, la existencia de los mismos y las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se materializaron, a partir del acervo probatorio que obra en el sumario, mismo que se integra por los elementos siguientes:

- a) **Documental pública**, consistente en la impresión del correo electrónico³² de trece de julio de dos mil dieciocho, recibido de la cuenta institucional patricio.ballados@ine.mx, correspondiente al Director Ejecutivo de la DEPPP, mediante el cual se informó a la UTCE que el hoy quejoso se encontró afiliado al PT, así como la fecha en que ello aconteció.
- b) **Documental privada** consistente en copia certificada de la solicitud de afiliación de Juan Bernardo Balanzar Jacobo al PT, de la cual se advierte la afiliación cuestionada, así como el año en que esta se realizó.

En torno a los medios de convicción citados, la documental pública indicada en el inciso a), cuenta con valor probatorio pleno, por provenir de un funcionario electoral en el ejercicio de sus atribuciones, tal como lo prevén los artículos 462, párrafo 2, de la LGIPE; y 27, párrafo 2, del *Reglamento de Quejas*, mientras que la documental privada referida en el inciso b) sólo hará prueba plena cuando, al ser valorada por este Consejo General, y concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos a que se refieren, con base en lo establecido en los artículos 462, párrafo 3, de la LGIPE; y 27, párrafo 3, del *Reglamento de Quejas*.

³² Visible a fojas 25 a 26

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBBJ/JD03/GRO/205/2018

Así las cosas, de los medios de prueba referidos se puede colegir lo siguiente:

Quejoso	Información proporcionada por la DEPPP ³³	Manifestaciones del Partido Político ³⁴
<p>El ciudadano quejoso denunció la presunta indebida afiliación, así como la utilización de datos personales sin consentimiento, atribuida al <i>PT</i>, mismo que aspiraba al cargo de supervisor electoral y/o capacitador asistente electoral.</p> <p>El quejoso, aportó como prueba impresión de pantalla de la página de este Instituto, mediante la que se desprende que la fecha de afiliación corresponde a 03/02/2014.</p>	<p>No se encontró coincidencia en los registros válidos del padrón de afiliados del Partido del Trabajo, no obstante, se localizó una coincidencia dentro del padrón de afiliados del Partido del Trabajo, con fecha de afiliación del 03 de febrero de 2014, en Guerrero, con el estatus 19 "Militante duplicado en otro partido posterior a la compulsa"; así como en el padrón de afiliados de otro partido político, con fecha de afiliación del 14 de junio de 2012. En ese sentido, de conformidad con el procedimiento establecido en el Acuerdo INE/CG85/2017 relativo a la verificación de que no exista doble afiliación entre los Partidos Políticos Nacionales y Locales, ambos partidos fueron notificados de tal situación a efecto de que subsanaran dicha inconsistencia, o en su caso, manifestaran lo que consideraran conveniente.</p>	<p>Informó que Juan Bernardo Balanzar Jacobo, si se encuentra afiliado a ese instituto político, por lo que se anexa copia certificada de su formato de afiliación, así como copia simple de su credencial para votar que obra en su expediente de afiliación y que la fecha de alta del ciudadano en comento data del año 2014.</p>
Observaciones		
<p>El partido político denunciado aportó copia certificada de la cedula de afiliación, en la que aparecen los datos del denunciante, los cuales tienen coincidencia con los datos que aparecen en la credencial para votar del quejoso, además de contener, aparentemente, su firma autógrafa.</p> <p>En uno de los apartados de la solicitud de afiliación exhibida por el denunciado, se advierte la fecha de afiliación del quejoso (miembro desde 2014).</p>		
Conclusiones		
<p>Del análisis vertido respecto a la información y pruebas recabadas, se puede concluir lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Juan Bernardo Balanzar Jacobo fue registrado como militante del <i>PT</i>; 2. La afiliación mencionada tuvo lugar el 03 de febrero de 2014; 3. El <i>PT</i> aportó elementos a partir de los cuales esta autoridad concluye que la afiliación del quejoso a dicho partido se realizó conforme con las disposiciones legales y estatutarias aplicables. 		
<p>De acuerdo a la información proporcionada por la <i>DEPPP</i> y el <i>PT</i>, no existe controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del referido instituto político, información que en momento alguno fue objetada por el quejoso, lo anterior en razón de que no desahogó la vista formulada para que en vía de alegatos manifestara lo que a su derecho conviniera, no obstante de haber sido notificado debidamente, por lo cual, es que NO se advierte que se hayan utilizado indebidamente sus datos personales, ni que el mismo haya sido indebidamente afiliado a dicho instituto político.</p>		

³³ Enviada vía correo electrónico, visible a fojas 23 a 24.

³⁴ Visible a fojas 31 a 34.

En este sentido, a partir del contenido de los medios de prueba antes citados, de su relación con los hechos afirmados por las partes y la verdad conocida, este Consejo General arriba a las siguientes conclusiones:

- Conforme a lo informado por la *DEPPP* y lo reconocido por el *PT*, el hoy quejoso, Juan Bernardo Balanzar Jacobo, fue afiliado al citado partido político el tres de febrero de dos mil catorce.
- Derivado que la incorporación al padrón de afiliados del hoy quejoso es un hecho reconocido por las partes, y constatado por la *DEPPP*, el tema a debate lo constituye la legalidad o ilegalidad de dicha afiliación, lo que habrá de determinarse dependiendo de la existencia del consentimiento de su titular o de la ausencia de este.

5. CASO CONCRETO

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por el quejoso, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGPE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; esto es, **partido político**, candidato o inclusive cualquier persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra, su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBBJ/JD03/GRO/205/2018

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

Ahora bien, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, la autoridad debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

Así, en consonancia con lo hasta aquí razonado, se tiene que la carga de la prueba respecto a que la afiliación materia de queja fue voluntaria, cuando en tal circunstancia se basa la defensa del partido político denunciado, corresponde a éste; mientras que la demostración de la objeción a la veracidad o autenticidad de dichas constancias corresponde al quejoso, pues de otra forma, deberá prevalecer la presunción de inocencia que asiste al partido político.

Así, en un primer momento, está demostrado, a partir de la información proporcionada por la *DEPPP*, así como de lo reconocido por el *PT* y de la constancia de afiliación aportada por el denunciado, que el quejoso fue afiliado al partido político en el tres de febrero de dos mil catorce, por lo que a continuación se debe dilucidar si dicha afiliación fue o no voluntaria, pues en este segundo caso, se actualizará la infracción denunciada y, en consecuencia, será procedente imponer una sanción entre las que establece el artículo 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIPE*.

En este sentido, la carga de la prueba para demostrar que la afiliación respectiva fue el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual del hoy quejoso, corresponde al *PT*, y no al quejoso acreditar que no dio su consentimiento para ser afiliado a dicho partido, al tratarse de un hecho negativo que no es objeto de prueba. Lo anterior, visto que la defensa establecida por el partido político estriba en afirmar que sí cumplió las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación.

Así, al haberse demostrado la existencia de la afiliación del quejoso al partido denunciado, el hecho a dilucidar se reduce a determinar si dicha afiliación fue consentida por la denunciante y por ende resulta legalmente válida, o si, por el contrario, tal afiliación adolece de manifestación de la voluntad libre, individual, pacífica y personal de Juan Bernardo Balanzar Jacobo, y en consecuencia debe reputarse ilícita.

Así las cosas, para sostener la legalidad de la afiliación cuestionada el *PT* ofreció como medio de prueba copia certificada de la solicitud de afiliación del hoy quejoso, medio de convicción que esta autoridad electoral, al valorarlos tanto en lo individual como en su conjunto con el caudal probatorio restante, estima suficientes, idóneos y pertinentes para acreditar la licitud de la afiliación controvertida.

No es obstáculo a lo anterior el hecho que se trata de una documental privada que *per se* no tiene una eficacia demostrativa plena, pues apreciada en su contexto y concatenada con el caudal probatorio que obra en autos, de conformidad con los principios de la lógica y la sana crítica, así como las máximas de la experiencia, permiten a esta autoridad electoral concluir la licitud de la afiliación discutida, ya que fue el resultado de la manifestación libre y voluntaria del hoy quejoso, la cual, como ya se dijo, quedó constatada con la firma autógrafa que plasmó en dicho formato.

De este modo, esta autoridad resolutora integró una cadena de indicios a partir de diversos hechos que en la especie se tuvieron como demostrados, en la especie: i) las manifestaciones de las partes y la *DEPPP* respecto a la existencia de la afiliación; ii) la documental privada de la solicitud de afiliación de Juan Bernardo Balanzar Jacobo, en cuyo contenido aparece la manifestación de la voluntad del quejoso (firma autógrafa) y; iii) la falta de objeción eficaz de ese formato.

En efecto, por cuanto hace a Juan Bernardo Balanzar Jacobo, es posible advertir de las constancias de autos que, aun cuando tuvo oportunidad procesal de objetar la autenticidad y contenido de la constancia de afiliación (cuando le fue corrido traslado con la constancia de afiliación exhibida por el *PT* y al dársele vista de alegatos) se abstuvo de cuestionar el documento referido, pues no se apersonó al procedimiento a formular manifestación alguna en ese sentido.

6. CONCLUSIÓN

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBBJ/JD03/GRO/205/2018

A partir de los razonamientos establecidos en el apartado previo, esta autoridad considera que la afiliación de Juan Bernardo Balanzar Jacobo al *PT* fue apegada a derecho, ya que, de lo expuesto puede afirmarse que la conducta realizada por el justiciable resulta atípica en relación con los injustos descritos en la normatividad electoral que le fueron imputados.

Lo anterior es así, porque como fue antes razonado, la actualización del tipo administrativo en estudio tiene como elementos constitutivos: i) una incorporación al partido político que se traduce en el acto de afiliación formal y, ii) la falta de consentimiento libre del ciudadano para ser afiliado.

En este sentido para colmar la hipótesis normativa contenida en el artículo 3, párrafo 2 de la Ley de Partidos en relación con los diversos 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) del mismo ordenamiento legal y 443, párrafo 1, incisos a) y n) de la *LGPE*, cuya infracción se imputó al denunciado, resultaba necesario que concurriera la acreditación de los dos elementos referidos, lo que no sucedió en el particular.

Es decir, en el caso debió demostrarse fehacientemente no solamente la afiliación del quejoso al *PT*, sino también la ausencia de voluntad del mismo para ser afiliado, en razón de que el núcleo del tipo administrativo en estudio lo constituye la libertad de asociación, de ahí que, si en la especie solamente se justificó la afiliación del quejoso sin evidenciar la ausencia de voluntad del mismo en ese acto, entonces, es inconcuso que no se colmó el tipo administrativo sujeto a escrutinio.

De igual manera, por las razones expuestas con antelación, tampoco se actualizó la hipótesis descrita en el numeral 29 de la *Ley de Partidos*, ya que al concluirse que el hoy quejoso se afilió libremente al partido justiciable, por mayoría de razón debe afirmarse que el *PT* no utilizó indebidamente la información y datos personales del impetrante, porque este, en su oportunidad, consintió afiliarse al partido político, para lo cual, conforme al marco normativo descrito en la presente Resolución, era menester proporcionar al *PT* esa información y documentos.

En suma, al no acreditarse uno de los extremos en que se finca el procedimiento sancionador, específicamente la falta de voluntad de afiliarse al partido denunciado, se concluye la inexistencia del tipo administrativo, por lo que no procede imponer al *PT* sanción alguna.

En suma, ante lo razonado en líneas precedentes, se debe concluir que el bien jurídico tutelado por las normas constitucionales y legales que protegen la libertad del ciudadano para afiliarse voluntariamente a un partido político, no fue transgredido por el *PT* y, consecuentemente, el presente procedimiento sancionador debe considerarse **INFUNDADO**.

CUARTO. DESAFILIACIÓN DEL QUEJOSO

En ese sentido, con independencia de que, en el fondo se ha declarado **infundado** el procedimiento, lo cierto es que resulta indudable que la intención de dicho denunciante es **no** continuar como afiliado al partido político denunciado, por lo que se debe ordenar a *PT* para que, en el supuesto que el quejoso continúe en su padrón de afiliados, **sin mayor trámite**, cancele el registro del mismo como su militante, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentó su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la *UTCE*, las pruebas que amparen el cumplimiento.

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017, de cinco de enero de dos mil diecisiete, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el *INE*, que lo vincule con un instituto político en particular.

QUINTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN.

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la Constitución Federal,^[1] se precisa que la presente determinación es

^[1] Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “**TUTELA**

impugnable a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previsto en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara **infundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra del **Partido del Trabajo** al no infringir las disposiciones electorales de libre afiliación respecto del ciudadano Juan Bernardo Balanzar Jacobo, en términos del Considerando TERCERO de esta Resolución.

SEGUNDO. Con independencia que en el fondo se ha declarado **infundado** el presente procedimiento, se ordena al **Partido del Trabajo** para que, de ser el caso que el quejoso -Juan Bernardo Balanzar Jacobo- continúe en su padrón de afiliados, **sin mayor trámite**, cancele su registro como su militante, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentó su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP* del *INE*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la *UTCE* las pruebas que amparen el cumplimiento, a fin de vigilar y corroborar el cumplimiento por parte del referido ente político, conforme a lo dispuesto en su Considerando CUARTO.

TERCERO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previsto en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Notifíquese al ciudadano **Juan Bernardo Balanzar Jacobo** y al **Partido del Trabajo**, por conducto de su respectivo representante ante este Consejo General; y por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1239/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO
EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/LCPS/JL/NAY/219/2018
DENUNCIANTE: LETICIA CONCEPCIÓN PÉREZ SAUCEDO
DENUNCIADO: PARTIDO DEL TRABAJO

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/LCPS/JL/NAY/219/2018 QUE SE DERIVA DEL CUADERNO DE ANTECEDENTES APERTURADO CON MOTIVO DEL OFICIO SIGNADO POR LOS VOCALES EJECUTIVO Y DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, AMBOS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN NAYARIT, A TRAVÉS DEL CUAL HICIERON DEL CONOCIMIENTO DE ESTA AUTORIDAD, HECHOS PRESUNTAMENTE CONTRAVENTORES DE LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, RELACIONADOS CON LA APARICIÓN DE CIUDADANOS QUE ASPIRABAN AL CARGO DE SUPERVISOR ELECTORAL Y/O CAPACITADOR ASISTENTE ELECTORAL, Y QUE SE ENCONTRARON EN EL PADRÓN DE DIVERSOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES, PRESUNTAMENTE SIN SU CONSENTIMIENTO

Ciudad de México, 12 de septiembre de dos mil dieciocho.

El presente procedimiento sancionador ordinario se tramitó en contra del partido político del Trabajo, por la supuesta indebida afiliación de Leticia Concepción Pérez Saucedo.

G L O S A R I O

Comisión:	La Comisión de Quejas y Denuncias del INE
Consejo General:	Consejo General del INE

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LCPS/JL/NAY/219/2018

COFIPE o Código:	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Constitución:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DEPPP:	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE
DERFE:	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE
IFE:	El otrora Instituto Federal Electoral
Instituto o INE:	Instituto Nacional Electoral
Ley de Medios:	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
Ley de Partidos:	Ley General de Partidos Políticos
LGIFE:	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
PT:	Partido del Trabajo
Quejosa o denunciante:	Leticia Concepción Pérez Saucedo
Reglamento de Quejas:	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
Sala Superior:	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
UTCE:	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE

A N T E C E D E N T E S

I. El presente procedimiento se deriva del Cuaderno de Antecedentes que fue precisado previamente, mismo que se relaciona con la aparición de ciudadanos que aspiraban al cargo de supervisor electoral y/o capacitador asistente electoral, en padrones de los Partidos Políticos Nacionales (en el caso, en el padrón del *PT*).

II. De igual manera, es necesario señalar que en el Cuaderno de Antecedentes ya referido, se ordenó requerir a la *DEPPP*, a efecto de que informara si los entonces aspirantes al cargo de supervisor electoral y/o capacitador asistente electoral, se encontraban registrados en los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales; de igual manera, se solicitó a los institutos políticos correspondientes, que proporcionaran información respecto de las afiliaciones detectadas.

III. Con los resultados obtenidos de la investigación preliminar, se instruyó dar Vista a cada uno de los ciudadanos respecto de los que se tramitó el Cuaderno de Antecedentes, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, respecto de esa información.

IV. En su oportunidad, se dictó acuerdo de cierre del citado Cuaderno y se ordenó que, en su momento se iniciaran los procedimientos sancionadores a que hubiere lugar, únicamente por cuanto hace a los ciudadanos que reiteraron su negativa respecto de la afiliación materia de controversia; posteriormente, se realizó el análisis de los entonces aspirantes al cargo de supervisor electoral y/o capacitador asistente electoral respecto de los que se ordenó apertura de procedimiento, y se les agrupó respecto de cada uno de los Partidos Políticos Nacionales con registro vigente; en el caso, el presente procedimiento se inició respecto del *PT* y Leticia Concepción Pérez Saucedo.

R E S U L T A N D O

I. REGISTRO, ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO. Mediante acuerdo de uno de agosto del año en curso,¹ el Titular de la *UTCE* instruyó la integración del expediente en que se actúa, el cual quedó registrado con la clave **UT/SCG/Q/LCPS/JL/NAY/219/2018**, como un procedimiento sancionador ordinario por la presunta indebida afiliación y el uso indebido de datos personales para ese fin.

En el acuerdo en cita, se admitió a trámite el procedimiento de sanción señalado con anterioridad respecto a Leticia Concepción Pérez Saucedo; asimismo, se ordenó emplazar al *PT*, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la conducta que se le imputó y aportara las pruebas que considerara pertinentes.

Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito.

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

EMPLAZAMIENTO				
CONSTANCIA CON LA CUAL SE MATERIALIZÓ LA DILIGENCIA	SUJETO EMPLAZADO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE CONTESTACIÓN AL EMPLAZAMIENTO	PRUEBAS OFRECIDAS
INE-UT/12117/2018 ²	PT	Tres de agosto de dos mil dieciocho	Diez de agosto de dos mil dieciocho	La Instrumental de Actuaciones y la Presuncional, en su doble aspecto, legal y humana.

II. ALEGATOS. Mediante acuerdo de catorce de agosto del año en curso,³ se ordenó dar vista a las partes, a efecto de que en vía de alegatos manifestaran lo que a su derecho conviniera.

El acuerdo de vista para alegatos, se diligenció en los siguientes términos:

¹ Visible en las páginas 99 a 107 del expediente.

² Visible en la página 111 a 125 del expediente

³ Visible en las hojas 149 a 152

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LCPS/JL/NAY/219/2018

VISTA PARA ALEGATOS				
CONSTANCIA CON LA CUAL SE MATERIALIZÓ LA DILIGENCIA	SUJETO NOTIFICADO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE CONTESTACIÓN	OBSERVACIONES
INE-UT/12586/2018 ⁴	PT	Quince de agosto de dos mil dieciocho	Diecisiete de agosto de dos mil dieciocho	<p>El partido político denunciado formuló diversas manifestaciones.</p> <p>Precisa que no vulneró la normatividad constitucional y legal en materia de afiliación, de ahí que se debe declarar infundado el procedimiento puesto que no transgredió los derechos de la quejosa.</p> <p>Ofrece como pruebas la Instrumental de Actuaciones y la Presuncional, en su doble aspecto, legal y humana.</p>
INE/JLE/NAY/3842/2018 ⁵	Leticia Concepción Pérez Saucedo	Dieciséis de agosto de dos mil dieciocho	NO HUBO RESPUESTA	NO APLICA

III. ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, toda vez que no había diligencias pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la *Comisión*.

IV. SESIÓN DE LA COMISIÓN. En la Octogésima Cuarta sesión extraordinaria urgente de carácter privado, celebrada el seis de septiembre de dos mil dieciocho, la *Comisión* resolvió el presente Proyecto de Resolución por unanimidad de votos de sus integrantes presentes, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA

⁴ Visible en las páginas 156 a 166 del expediente.

⁵

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LCPS/JL/NAY/219/2018

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *Ley de Partidos*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte del *PT*, en perjuicio de Leticia Concepción Pérez Saucedo.

Ahora bien, conforme al artículo 23 del *COFIPE*, los partidos políticos deben ajustar su conducta a las disposiciones establecidas en el citado *Código*, correspondiendo al otrora *IFE* —ahora *INE*— vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n); y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho *Código*, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38 del dispositivo legal en cita, las cuales son sancionables por el *Consejo General*.

Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443 párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la *LGIPE* y 25, de la *Ley de Partidos*, respectivamente.

En consecuencia, siendo atribución del máximo órgano de dirección del INE conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, esta autoridad resulta competente para conocer y resolver respecto de la presunta infracción denunciada, atribuida al *PT*, derivada esencialmente, de la violación al derecho de libertad afiliación y utilización indebida de datos personales.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,⁶ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de militantes.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIPE* —los cuales contienen reglas que ya se encontraban previstas en el *COFIPE*, en los artículos 342, párrafo 1, inciso a); 356, 361, 364, 365 y 366—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, segundo párrafo, de la *Constitución*, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO

De conformidad con las constancias que obran en el expediente, esta autoridad concluye que la legislación comicial aplicable para la resolución del fondo del asunto será el **COFIPE**.

⁶ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

Toda vez que la presunta falta (indebida afiliación) se cometió durante la vigencia del citado Código, puesto que, como se desprende de las documentales aportada por la DEPPP, el registro o afiliación de la quejosa al *PT* se realizó antes del treinta y uno de marzo de dos mil catorce, fecha en la cual se encontraba vigente el citado instrumento legal.

Por tanto, si al momento de la comisión de las presuntas faltas se encontraba vigente el *COFIPE*,⁷ es claro que este ordenamiento legal debe aplicarse para las cuestiones sustantivas del presente procedimiento, al margen que la falta pudiera haber sido advertida por la quejosa y cuestionada mediante la queja que dio origen al presente asunto, una vez que dicha norma fue abrogada por la *LGIPE*, así como que este último ordenamiento sea fundamento para cuestiones procesales o adjetivas.

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO

1. LITIS

En el presente asunto se debe determinar si el *PT* afilió indebidamente o no a Leticia Concepción Pérez Saucedo, ciudadana que alega no haber dado su consentimiento para estar en sus filas, haciendo para ello uso ilegítimo de su información personal, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *Ley de Partidos*.

2. MARCO NORMATIVO

A) Constitución, tratados internacionales y ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al

⁷ El COFIPE estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce

denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

...

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y

locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no sólo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracción I, párrafo segundo, *in fine*, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 24/2002 emitida por la *Sala Superior*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES.**

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,⁸ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su

⁸ Consultable en la página https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes — asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

Artículo 23. Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:

I...

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:

- a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y*
- b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.*

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;
- Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
- Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGIFE*, que es obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* del *IFE* por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *H. Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su constitución y registro.

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.
- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.

- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación

idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna del *PT*

A efecto de tener claridad acerca del proceso que un ciudadano debe llevar a cabo para convertirse en militante del partido político ahora denunciado, se hace necesario analizar la norma interna del partido político, para lo cual, enseguida se transcribe la parte conducente de los Estatutos del *PT*⁹

⁹ http://partidodeltrabajo.org.mx/2011/portal_transparencia/art76/XIV/10.pdf

...

CAPÍTULO IV.

DE LOS MILITANTES, AFILIADOS Y SIMPATIZANTES.

Artículo 14. *Son militantes del Partido del Trabajo, los mexicanos, mujeres y hombres, que acepten y suscriban los Documentos Básicos y sus políticas específicas. Deberán participar activa y permanentemente en una instancia del Partido del Trabajo y en una organización social y sus luchas. Deberán aplicar las líneas políticas del Partido, actuar con honestidad y disciplina y pugnar por conservar su unidad. Por tratarse de un Instituto Político Nacional, en el cual sus militantes, afiliados y simpatizantes **participan en forma personal y voluntaria**, además que el ejercicio de sus actividades políticas se encuentran consideradas en el artículo 35 Constitucional, como prerrogativas de los ciudadanos; en consecuencia, en ningún momento la militancia de los mismos en el Partido del Trabajo, generará derechos laborales.*

Artículo 15. *Son derechos de los militantes del Partido del Trabajo:*

- a) Votar y ser votados para todos los Órganos de Dirección, demás Órganos del Partido en todos los niveles y para todas las Comisiones que integran sus estructuras orgánicas, cuando cumplan los requisitos estatutarios para ello.*
- b) Votar y ser votados como candidatos del Partido del Trabajo a los cargos de elección popular.*
- c) Discutir, proponer y votar libremente en torno a las líneas generales del trabajo de masas, ideológico, teórico, político y organizativo del Partido, en las instancias respectivas.*
- d) Recibir la orientación por las instancias partidarias respectivas, para realizar su trabajo entre las masas y su trabajo partidario.*
- e) Recibir el apoyo necesario en el cumplimiento de sus tareas de acuerdo a las posibilidades del Partido. Ser informado de las actividades del Partido del Trabajo en todas sus instancias y regiones, a excepción de los problemas que por su propia naturaleza delicada, deben tratarse con reserva y discreción.*
- f) Manifestar y sostener sus puntos de vista, en todas las instancias del Partido y formar parte de corrientes de opinión, respetando la normatividad estatutaria y no cayendo en prácticas divisionistas.*

- g) Recibir el apoyo del Partido del Trabajo para su formación teórico política, participando en el Sistema Nacional de Escuelas de Cuadros del Partido, asistiendo a los cursos de formación que las diversas instancias de éste organicen o a cualquier evento de formación organizado por el Partido del Trabajo.*
- h) Ser designados para representar al Partido del Trabajo en los diferentes foros nacionales e internacionales.*
- i) Ser promovido, en forma justa y equitativa, recibir estímulos y reconocimientos del Partido del Trabajo cuando destaque por su trabajo realizado.*
- j) Expresar sus puntos de vista libremente con un afán constructivo y propositivo en los periódicos y revistas del Partido del Trabajo.*
- k) Libertad para hacer propuestas, emitir opiniones, para realizar críticas y autocríticas y tendrán derecho a ser escuchados en todas las instancias del Partido del Trabajo.*

Artículo 16. *Son obligaciones de los militantes:*

- a) Participar en una instancia de base del Partido del Trabajo e informar periódicamente de sus actividades a la dirección o las direcciones correspondientes.*
- b) Participar activa y permanentemente en una organización social.*
- c) Acatar los resolutivos de los Congresos y demás instancias del Partido del Trabajo y llevar a la práctica sus líneas generales.*
- d) Cumplir con las tareas que le sean encomendadas por las organizaciones sociales y por el Partido del Trabajo, en sus diversas instancias.*
- e) Respetar la estructura orgánica del Partido del Trabajo, obedecer su disciplina y acatar sus Órganos de Dirección.*
- f) Preservar la unidad del Partido del Trabajo.*
- g) Defender al Partido del Trabajo en todo lugar y momento.*
- h) Cuidar de los recursos financieros, materiales, bienes muebles e inmuebles del Partido del Trabajo que estén bajo su responsabilidad y firmar los resguardos correspondientes. Dar cuenta del destino de los mismos y en su caso, reintegrarlos de inmediato en buen estado cuando le sean requeridos por las instancias partidarias. En caso de incumplimiento o negativa se procederá judicialmente en su contra, por parte de la instancia correspondiente o por parte de las instancias superiores del Partido. Estas obligaciones se hacen extensivas para los afiliados y simpatizantes del Partido del Trabajo.*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LCPS/JL/NAY/219/2018

- i) En su caso, pagar la cuota que le corresponda.*
- j) No dirimir conflictos intrapartidarios en los medios de comunicación externos.*
- k) Los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional, de la Comisión Coordinadora Nacional, los Comisionados Políticos Nacionales y demás Órganos Nacionales del Partido; de las Comisiones Ejecutivas Estatales o del Distrito Federal, de la Comisión Coordinadora Estatal o del Distrito Federal y los que ocupen un cargo de responsabilidad pública y representación popular, deberán entregar su declaración patrimonial ante la Comisión Nacional de Contraloría y Fiscalización, a más tardar dos meses después de su elección o nombramiento.*
- l) Los militantes y afiliados que ocupen cargos de representación popular y de servidores públicos, deberán comprometerse a aportar las cuotas al Partido del Trabajo de acuerdo a los siguientes criterios:*
 - I. Se entiende por percepciones: los sueldos, salarios, dietas y honorarios netos.*
 - II. Las cuotas que se recauden por este concepto se destinarán al Sistema Nacional de Escuelas de Cuadros, cuando éstas provengan del ámbito Federal y para las escuelas Estatales cuando provengan del ámbito Estatal o del Distrito Federal y Municipal o Delegacional. Cuando exista escuela de cuadros Municipal, los ingresos se entregarán en ese ámbito. Los criterios anteriores se presentan en el siguiente tabulador: PERCEPCIÓN CUOTA*

<i>Hasta 5 salarios mínimos mensuales:</i>	<i>2%</i>
<i>De 6 hasta 12 salarios mínimos mensuales:</i>	<i>5%</i>
<i>De 13 hasta 30 salarios mínimos mensuales:</i>	<i>10%</i>
<i>De 31 hasta 42 salarios mínimos mensuales:</i>	<i>15%</i>
<i>De 43 salarios mínimos mensuales en adelante:</i>	<i>20%</i>

Quienes no cumplan con lo anterior, serán acreedores a las sanciones que establecen el artículo 115 de los presentes Estatutos, de conformidad con las resoluciones que emitan las instancias internas encargados de dirimir conflictos.
- m) Aplicar la Línea de Masas para todo trabajo que se realice.*
- n) Educarse teórica y políticamente en el Sistema Nacional de Escuelas de Cuadros del Partido del Trabajo.*
- o) No permitir ni propiciar la injerencia del Estado en la vida del Partido del Trabajo.*

Artículo 17. *Son afiliados al Partido del Trabajo los mexicanos mujeres y hombres que acepten la Declaración de Principios, el Programa de Acción y*

los Estatutos y colaboren con algunas tareas del Partido, especialmente las electorales. Sus derechos son:

- a) Votar y ser votados para ocupar los Órganos de Dirección demás Órganos del Partido en todos los niveles y para todas las Comisiones que integran sus estructuras orgánicas, cuando cumplan los requisitos estatutarios para ello.*
- b) Votar y ser votados como candidatos del Partido del Trabajo a los cargos de elección popular.*
- c) Presentar propuestas a las diferentes instancias del Partido del Trabajo sobre aspectos políticos, electorales, organizativos y de lucha de masas.*
- d) Capacitarse teórica y políticamente en las Escuelas de Cuadros.*
- e) Conocer y discutir los documentos públicos e internos del Partido del Trabajo.*
- f) Recibir orientación para realizar su trabajo entre las masas y ser informado de las actividades del Partido del Trabajo en todas sus instancias. Se excluyen un reducido número de problemas que por su naturaleza delicada no pueden informarse abiertamente.*
- g) Manifestar y sostener sus puntos de vista en todas las instancias del Partido del Trabajo y formar parte de corrientes de opinión, respetando la normatividad estatutaria, y no cayendo en prácticas divisionistas.*
- h) Los afiliados podrán estar incorporados en algún organismo de base del Partido del Trabajo.*
- i) Manifestar sus puntos de vista a nivel personal sin involucrar al Partido del Trabajo en su conjunto.*

Artículo 18. *Son obligaciones de los afiliados:*

- a) Aceptar los Documentos Básicos.*
- b) Acatar y practicar la línea política, acuerdos y resoluciones del Partido del Trabajo.*
- c) Educarse teórica y políticamente en el sistema Nacional de Escuelas de Cuadros del Partido del Trabajo y estar actualizado de la situación local, nacional e internacional.*
- d) Aplicar la Línea de Masas para todo trabajo que se realice.*
- e) Participar en algún nivel de trabajo partidario y además en las organizaciones sociales o en algunas franjas de la sociedad.*
- f) Aportar las cuotas establecidas por la instancia del Partido del Trabajo donde se participe.*

- g) Los afiliados deberán promover la afiliación permanente en lo individual de personas al Partido del Trabajo y el ingreso formal será revisado por los organismos de dirección correspondientes cuando se considere pertinente.*
- h) Cumplir con los compromisos contraídos con el Partido del Trabajo y las organizaciones sociales.*
- i) Promover el voto en los distintos procesos electorales de nuestra opción partidaria.*
- j) No dirimir conflictos intrapartidarios en los medios de comunicación externos.*
- k) No permitir ni propiciar la injerencia del Estado en la vida del Partido del Trabajo.*
- l) Cotizar al Partido en los términos que establece el Artículo 16 Inciso l); de los presentes Estatutos.*

Artículo 19. *Son simpatizantes aquellas personas que se identifiquen con el proyecto general del Partido del Trabajo, con su lucha social, política, electoral y ciudadana y promuevan el voto por nuestra opción partidaria.*

Artículo 20. *Los simpatizantes del Partido del Trabajo participarán principalmente en la lucha electoral, ciudadana, sectorial y social. Colaborarán en aspectos financieros, de infraestructura y en cualquier apoyo en general. Los simpatizantes tendrán los siguientes derechos:*

- a) Conocer las líneas fundamentales de nuestro trabajo político, así como la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos de nuestro Partido.*
- b) Conocer nuestra política para cada sector del pueblo.*
- c) Libertad para emitir opiniones y críticas. Las Comisiones Ejecutivas Municipales o Delegacionales aceptarán la solicitud de ingreso de los simpatizantes, en su calidad de afiliados. En caso de negativa, las solicitudes se podrán hacer ante las Comisiones Ejecutivas Estatales, del Distrito Federal, o ante la Comisión Ejecutiva Nacional.*

Artículo 21. *Son obligaciones de los simpatizantes: a) Conocer nuestra línea política y Documentos Básicos.*

- b) Promover el voto a favor de nuestro Partido.*
- c) Participar en los actos más relevantes del Partido del Trabajo.*
- d) No dirimir conflictos intrapartidarios en los medios de comunicación.*

CAPÍTULO V.

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INGRESO.

Artículo 22. *Los requisitos de ingreso de los afiliados al Partido del Trabajo son:*

- a) Estar comprometido en la lucha del pueblo mexicano.*
- b) Conocer la línea del Partido del Trabajo y coincidir con ella, así como con sus Documentos Básicos.*
- c) No militar en otra organización partidaria nacional o antagónica al Partido del Trabajo.*
- d) Presentar una solicitud de afiliación por escrito, a la instancia partidaria correspondiente.*
- e) Cubiertos los requisitos, el Partido del Trabajo podrá aceptar la solicitud de ingreso y emitir la constancia de afiliación.*
- f) En caso de que la constancia de ingreso respectiva de afiliados, simpatizantes y militantes no sea emitida por la instancia correspondiente, en un plazo de 30 días, ésta se dará por aceptada. Los afiliados podrán ser promovidos a militantes.*

...

De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente:

- Para militar en el *PT*, los mexicanos, mujeres y hombres, deberán aceptar y suscribir los Documentos Básicos y sus políticas específicas.
- Para estar afiliado al *PT*, los mexicanos mujeres y hombres deberán aceptar la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos y deberán de colaborar con algunas tareas del Partido, especialmente las electorales.
- Uno de los requisitos formales para afiliarse al *PT*, consiste en presentar una solicitud de afiliación por escrito, a la instancia partidaria correspondiente.

D) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos

personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

3. CARGA Y ESTANDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante del *PT*, por regla general debe acudir a las instancias partidistas competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso en particular el *PT*), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del *COFIPE*, precepto que, derivado de la reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la *Ley de Partidos*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en

condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y voluntaria.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley,

pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la Sala Superior, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**,¹⁰ donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Jurisprudencia 21/2013, de rubro: **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,¹¹ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria¹² y como estándar probatorio¹³.

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación¹⁴ ha estimado que es posible derrotar la presunción de

¹⁰ http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

¹¹ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60

¹² Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

¹³ Véase la jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. ²² Véase la nota 35.

¹⁴ Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO**.

inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la Sala Superior consideró en la sentencia referida, que para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la *Ley de Medios*, con fundamento en el diverso 441 de la *LGIFE*, lo que implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la

expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento ordinario sancionador una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino que conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que

justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

4. HECHOS ACREDITADOS Y PRECISIONES

Como se ha mencionado, la denuncia presentada por la *quejosa*, versa sobre la supuesta violación a su derecho de libertad de afiliación, al ser incorporada al padrón del *PT*, presuntamente sin su consentimiento, así como la utilización de sus datos personales, por dicho partido político para sustentar tal afiliación.

Ahora bien, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de la infracción denunciada, debe precisarse lo siguiente:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LCPS/JL/NAY/219/2018

Leticia Concepción Pérez Saucedo		
Quejosa	Información proporcionada por la <i>DEPPP</i> ¹⁵	Manifestaciones del Partido Político ¹⁶
<p>Señaló que en el mes de noviembre de dos mil dieciséis participó en el proceso de selección al cargo de capacitador asistente electoral del <i>INE</i>, y que en la plática de inducción de dicho proceso se se enteró de que se encontraba inscrita en el padrón de militantes del <i>PT</i>.</p> <p>Precisó que desconoce cualquier nexos o simpatía hacia tal ente político y que nunca ha sido su voluntad pertenecer al mismo.</p>	<p>Informó que el denunciante está afiliado al <i>PT</i> desde el <u>uno de febrero de dos mil ocho</u>.</p>	<p>Refirió que se encontraron registros correspondientes a diversos ciudadanos, entre ellos a la quejosa, pero manifestó no haber localizado documentación soporte de tales afiliaciones.</p>
Conclusiones		
<p>Del análisis vertido respecto a la información y pruebas recabadas se advierte lo siguiente:</p> <p>1.- La quejosa negó haber dado su consentimiento para ser afiliada al <i>PT</i>.</p> <p>2.- La <i>DEPPP</i> informó que la quejosa apareció en el padrón de militantes del <i>PT</i>.</p> <p>3.- El <i>PT</i> admite que en su registro de militantes está inscrita la quejosa, no obstante, no aporta documento alguno que permita arribar a la conclusión que la citada afiliación se realizó de acuerdo con la ley.</p>		

Ahora bien, debe precisarse que las constancias aportadas por la *DEPPP*, al ser documentos emitidos por autoridades dentro del ámbito de sus facultades, se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del *Reglamento de Quejas*, mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la *LGIPE* y 27, párrafo 2 del Reglamento citado; por

¹⁵ Visible en las hojas 40 a 43 del expediente

¹⁶ Oficio REP-PT-INE-PVG-028/2017, visible en las hojas 40 a 48 del expediente.

tanto, tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

En el mismo tenor, las documentales allegadas al expediente por el partido político denunciado, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracción II del *Reglamento Quejas*; por lo que, por sí mismas, carecen de valor probatorio pleno, y sólo alcanzarán ese grado cuando, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, generen convicción en este *Consejo General* sobre la veracidad de los hechos a que se refieren, ello al tenor de lo preceptuado en los artículos 462, párrafo 3 de la *LGIFE*, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención.

5. CASO CONCRETO

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por los quejosos, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5 del *COFIPE*, cuyo contenido se replica en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIFE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; esto es, **partido político**, candidato o inclusive cualquier persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta

(elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

Ahora bien, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, la autoridad debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

En principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento que formula en contra de la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde al quejoso.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la *Ley de Medios*, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 de la *LGIPE*.

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, referido previamente, que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que contaba con el consentimiento de la quejosa para afiliarla a su partido político, y no a

la ciudadana que negó haber solicitado su inclusión en el padrón de militantes del PT.

Por lo que, en el caso concreto, la carga de la prueba corresponde a *PT*, en tanto que el dicho de la quejosa consiste en demostrar que no dio su consentimiento para ser afiliada, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba.

Así, como vimos en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, está demostrado a partir de la información proporcionada por la *DEPPP* que la ciudadana denunciante fue incorporada en el Padrón de Afiliados del *PT*, el uno de febrero de dos mil ocho.

Por otra parte, el *PT* no demostró con medios de prueba, que la afiliación respectiva sea el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de **Leticia Concepción Pérez Sucedo**, debiendo precisar que la carga de la prueba corresponde al citado instituto político, en tanto que la carga para la actora consiste en demostrar que no dio su consentimiento para ser afiliada, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba.

En tanto que el partido político denunciado, cuya defensa consiste básicamente en afirmar que sí cumplió las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación, tiene el deber de probar esa situación.

Ahora bien, tal y como quedó de manifiesto en el apartado del *MARCO NORMATIVO* de la presente Resolución, así como en el correspondiente a *CARGA Y ESTANDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO*, la libertad de afiliación en materia político-electoral, es un derecho reconocido y así garantizado para todo ciudadano de nuestro país, al menos desde hace varias décadas, tanto a nivel constitucional como legal, el cual es concebido como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido político, permanecer afiliado a éste, desafilarse e, incluso, no pertenecer a ninguno. Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección de datos personales e información relacionada con la vida privada de las personas, es igualmente un derecho con una trayectoria de protección por demás lejana.

En este sentido, es pertinente dejar en claro que la garantía y protección a los citados derechos, evidentemente no deriva de disposiciones reglamentarias al interior de los institutos políticos, que prevean como obligación del partido político, la conservación de los expedientes de afiliación de cada miembro, ni tampoco a partir de la emisión de los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, emitidos por el propio INE en la Resolución CG617/2012, sino que, como se vio, el derecho tutelado deviene de disposiciones de rango supremo, el cual debe ser tutelado en todo momento, y no a partir de normas internas o reglamentarias que así lo establezcan.

En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos políticos es un derecho de los ciudadanos previsto como garantía constitucional en nuestro País desde hace décadas, también lo es la obligación de los partidos políticos de preservar, y en su caso, de demostrar, en todo momento, que cualquier acto que engendre la voluntad de un ciudadano para formar parte en las filas de un instituto político, esté amparado en el o los documentos que demuestren indefectiblemente el acto previo del consentimiento, siendo **ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no se tiene o tenía el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes.**

Lo anterior, porque, como se mencionó, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que, de manera insuperable, el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

En este sentido, toda vez que la denunciante manifiesta no haber otorgado su consentimiento, que su afiliación se comprobó por la autoridad electoral competente, y que el *PT*, no cumplió su carga para demostrar que la afiliación sí se solicitó voluntariamente; esta autoridad electoral considera que existe una vulneración al derecho de afiliación de la quejosa y que, intrínsecamente, para la configuración de esa falta utilizaron sin autorización sus datos personales, lo cual, debe ser considerado por esta autoridad para la imposición de la sanción respectiva.

Lo anterior pone de manifiesto el hecho de que **Leticia Concepción Pérez Saucedo, si fue afiliada** al referido instituto político, por tanto, se trata de un hecho no controvertido y, por consiguiente, no sujeto a prueba en términos de lo previsto en el artículo 358 del *COFIPE*, mismo que se replica en el 461 de la *LGIFE*.

Ahora bien, como quedó precisado con anterioridad la carga de la prueba corresponde al *PT*, quien tuvo que aportar las pruebas suficientes para demostrar que la quejosa, fue afiliada de forma voluntaria al citado instituto político.

No obstante, de las constancias que obran en el expediente no se advierte documento alguno que demuestre, ni siquiera de forma indiciaria que la afiliación de

Leticia Concepción Pérez Saucedo al *PT* fue el resultado de la voluntad libre e individual de la citada ciudadana, en la cual, *motu proprio*, expresara su consentimiento y, por ende, proporcionara sus datos personales a fin de ser afiliada a dicho partido político.

En su defensa, el *PT* únicamente se limitó a manifestar lo siguiente:

(...)

En relación a los CC. Christian Iván Álvarez Amparo, Martín Estrada Hernández, Miriam Janeth Peña Venegas, Tania Gabriela Paredes González y **Leticia Concepción Pérez Saucedo**; y después de realizado una búsqueda exhaustiva en el Sistema Nacional de Afiliación del Partido del Trabajo con dichos nombres, se encontraron cinco registros con dichos nombres, pero derivado del cambio de domicilio de diversos comités municipales, no fue posible encontrar la documentación soporte de los ciudadanos antes mencionados.

(...)

Sin aportar documento alguno que permitiera a esta autoridad constatar que fue voluntad de la quejosa pertenecer a dicho instituto político, en el caso, por lo que se refiere a Leticia Concepción Pérez Saucedo.

Ahora bien, no pasa desapercibido para esta autoridad que el *PT* manifestó que no cuenta con la constancia de afiliación respectiva, debido a los cambios de domicilio de los diversos comités municipales, no obstante dichas manifestaciones no los relevan de su deber de **conservar y resguardar**, con el debido cuidado, la documentación soporte en la que conste la afiliación libre y voluntaria de sus militantes o afiliados, puesto que, se insiste, le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esto es así, porque los partidos políticos, son entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el

ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, por lo que están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar la documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

En conclusión, ante los hechos denunciados originalmente, esta autoridad electoral nacional requirió al *PT* para que informara si la quejosa estaba afiliada a dicho instituto político, y en su caso, proporcionara la constancia correspondiente que permitiera acreditar la afiliación de Leticia Concepción Pérez Saucedo, además de que se le emplazó por ese motivo y se le dio oportunidad para que, en vía de alegatos, manifestara lo que a su derecho conviniera, pero en ninguna de las etapas procesales realizó alegación que desvirtuara el agravio de la quejosa, ni ofreció o aportó pruebas de descargo que resultaran idóneas o suficiente para eximirlo de responsabilidad.

Por el contrario, es menester mencionar que el *PT* al contestar el emplazamiento y la vista de alegatos, realizó manifestaciones genéricas en torno a la normatividad constitucional y legal que regula las afiliaciones de militantes, sin realizar algún pronunciamiento concreto en torno a la quejosa.

Por tanto, se advierte que el *PT* no demostró que la afiliación de Leticia Concepción Pérez Saucedo, se hubiera realizado a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento que permita constatar que dicha ciudadana hubiera dado su consentimiento para ser afiliada, ni mucho menos que hayan permitido o entregado datos personales para ese fin, los cuales se estiman necesarios para procesar la afiliación, dado que estos elementos se constituyen como insumos obligados para, en su momento, llevar a cabo una afiliación, de ahí que esto sea necesario e inescindible.

Con base en ello, ante la negativa de la denunciante de haberse afiliado al *PT*, correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de pruebas idóneas, que la afiliación se llevó a cabo a través de los mecanismos legales para ello, en donde

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LCPS/JL/NAY/219/2018

constara fehacientemente la libre voluntad de la hoy promovente, lo que no hizo, pues no basta con admitir que la denunciante aparece en su padrón de afiliados, sino que era necesario que comprobara de manera objetiva que dicha afiliación se realizó al amparo de la ley.

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación al *PT* implica, además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que pudiera haber servido de base o justificación al partido político para afiliarse a la ahora quejosa.

Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales, tiene íntima vinculación con la indebida afiliación de la quejosa, lo cual ya quedó debidamente acreditado y, como consecuencia de ello, merece la imposición de las sanciones que se determinarán en el apartado correspondiente.

Aunado a lo anterior, cabe referir que similar criterio fue adoptado por este máximo órgano de dirección, al dictar las resoluciones INE/CG787/2016 e INE/CG53/2017,¹⁷ dentro de los procedimientos sancionadores ordinarios UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y UT/SCG/Q/PRD/JL/SIN/6/2016 acumulados, y UT/SCG/Q/MECG/JD06/CHIH/4/2016, respectivamente, derivado de una falta de la misma naturaleza a la que aquí se estudia, en donde se determinó que el uso de datos personales poseía un carácter intrínseco o un elemento esencial para la configuración de una afiliación indebida.

Lo anterior encuentra también sustento en lo establecido por la Sala Superior, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-141/2018, sentencia en la que estableció, en la parte que interesa, lo siguiente:

“...los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de un

¹⁷ Aprobado en Sesión Extraordinaria del Consejo General celebrada el siete de marzo de dos mil diecisiete. Consultable en la liga de internet http://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-resoluciones/2017/03_Marzo/CGex201703-07/CGex201703-7-rp-2.1.pdf

ciudadano pertenecer a un partido político, no puede alegar que existe uso indebido de sus datos personales porque se consideran públicos.

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban pertenecer...”

Cabe destacar que la resolución INE/CG53/2017, fue confirmada por la Sala Superior, al resolver el recurso de apelación **SUP-RAP-107/2017**, donde se consideró que, **conforme a las reglas de carga de la prueba, el partido político denunciado debía justificar que la quejosa fue afiliada voluntariamente, de manera que la prueba idónea que podía aportar al procedimiento para demostrar su hipótesis de inocencia, era precisamente la constancia de afiliación de la ciudadana, sin que así lo hubiera hecho.**

Por lo anterior, este órgano colegiado considera pertinente declara **fundado** el presente procedimiento, pues de las constancias que obran en el expediente se concluye que el *PT* infringió las disposiciones electorales tendentes a demostrar la libre afiliación de Leticia Concepción Pérez Saucedo quien apareció como afiliada a dicho instituto político, por no demostrar el **ACTO VOLITIVO** de ésta para permanecer agremiada a ese partido político.

Ahora bien, más allá de la determinación de responsabilidad al partido político y la consecuente imposición de sanción, esta autoridad debe tutelar el derecho fundamental de afiliación de los quejosos, es decir, estamos frente a la defensa de un derecho humano de naturaleza político-electoral, que en términos del artículo 1° de la Constitución Federal debe ser respetado, protegido y garantizado por todas las autoridades del Estado Mexicano.

En tal sentido, se tiene que la voluntad de la denunciante consiste en no pertenecer a este partido político, por lo que se debe ordenar al *PT* para que, en el supuesto que la quejosa continúe en su padrón de afiliados, **sin mayor trámite**, cancele el registro como su militante, y hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo

remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, las pruebas que amparen el cumplimiento.

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017, de cinco de enero de dos mil diecisiete, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el INE, que lo vincule con un instituto político en particular.

Por tanto, es de concluirse que, a partir de las constancias que obran en autos, se tiene acreditado que el *PT* vulneró el derecho de libertad de afiliación —utilizando indebidamente datos personales—, respecto de Leticia Concepción Pérez Saucedo a partir del uno de febrero de dos mil ocho.

En consecuencia, al determinarse que el *PT* infringió la norma electoral ya señalada, lo conducente es establecer la sanción correspondiente.

CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS SANCIONES. Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de las faltas denunciadas, así como la responsabilidad del *PT*, en el caso detallado en el considerando que antecede, procede ahora determinar la sanción correspondiente, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 355, párrafo 5 del *COFIPE*, cuyo contenido se reproduce en el diverso 458, párrafo 5, de la *LGIFE*, relativo a la gravedad de la responsabilidad en que se incurra; el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; y, en su caso, la reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.

En relación con ello, la Sala Superior ha sostenido que para individualizar la sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se deben

tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción electoral.

1. Calificación de la falta

A) Tipo de infracción

Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
La infracción se cometió por una acción del partido político denunciado, que transgredió disposiciones de la <i>Constitución</i> y del <i>COFIPE</i> , en el momento de su comisión.	La conducta fue la afiliación indebida y el uso no autorizado de los datos personales de trece ciudadanos.	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la <i>Constitución</i> ; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del <i>COFIPE</i> ; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la <i>LGIPE</i> ; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la <i>Ley de Partidos</i> .

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o prohibidas.

En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el caso concreto, se acreditó que el *PT* incluyó indebidamente en su padrón de afiliados, a **Leticia Concepción Pérez Saucedo** respecto de quien se determinó previamente la indebida afiliación y utilización de datos personales, en razón de que el citado instituto político no demostró que para incorporarla medió la voluntad de ésta de inscribirse como su militante, violentando con ello la norma electoral, en

específico las disposiciones precisadas en el recuadro inserto en el subapartado previo.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de los ciudadanos mexicanos, de optar libremente por ser o no militante de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, efectivamente consintieron libremente en ser sus agremiados.

Por otra parte, como se analizó, para la indebida afiliación acreditada en el expediente que se resuelve se usaron los datos personales de la quejosa sin que hubiera otorgado su consentimiento para ello, lo cual, constituye un elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida.

En efecto, si bien es cierto, a partir de las constancias que obran en autos no está demostrado que los datos personales hubieran sido utilizados con un propósito diverso a la afiliación indebida en sí misma, o bien su difusión frente a terceros, lo es también que dicha información fue necesaria para materializar la incorporación de los datos de la denunciante al padrón de militantes del partido político denunciado.

De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción correspondiente al partido político involucrado.

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que el *PT* transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la normativa interna del propio instituto político, y que, tal infracción se cometió en detrimento de los derechos de una ciudadana, esta situación no conlleva estar en presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de afiliación al *PT*, el cual incluyó en su padrón de militantes a la quejosa respecto de los que se acreditó la conducta analizada, sin demostrar el consentimiento previo para ello.

D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

- a) Modo.** En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles al *PT* consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *Ley de Partidos*, al incluir en su padrón de afiliados a Leticia Concepción Pérez Saucedo, sin tener la documentación soporte que acredite fehacientemente su voluntad de pertenecer a las filas de dicho instituto político.
- b) Tiempo.** En el caso concreto, se tiene como temporalidad de la afiliación indebida el **uno de febrero de dos mil ocho**, según quedó precisado en párrafos precedentes.
- c) Lugar.** Con base en las razones plasmadas en el escrito de denuncia, se deduce que la falta atribuida al partido político denunciado se cometió en el estado de **Nayarit**.

E) Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Se considera que en el caso existe una conducta **dolosa** por parte del *PT*, en violación a lo previsto en los artículos ya establecidos en los párrafos anteriores.

La falta se califica como **dolosa**, por lo siguiente:

- El *PT* es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus de **entidad de interés público**, de conformidad con el artículo 41 constitucional.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LCPS/JL/NAY/219/2018

- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Federal; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- El *PT*, como cualquier otro partido está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 38, párrafo 1, inciso a), del *COFIPE*.
- El de libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.
- Todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.
- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41,

Base I, párrafo segundo, de la Constitución Federal; 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e) del COFIPE.

- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria.**
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, es una violación de orden constitucional y legal que **requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento.**

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta se considera dolosa, porque:

- 1) La quejosa aduce que no solicitó en momento alguno su registro o incorporación como militante al partido hoy denunciado.
- 2) Quedó acreditado que la quejosa apareció en el padrón de militantes del *PT*.
- 3) El partido político denunciado no demostró que la afiliación de la quejosa se hubiera realizado a través de los mecanismos legales y partidarios

conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y voluntaria de la denunciante.

- 4) El *PT* no demostró ni probó que la afiliación de la **quejosa respecto de la que se determinó como fundada la infracción**, fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun indiciaria, para estimar que la afiliación de la quejosa fue debida y apegada a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.

F) Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el *PT*, se cometió al afiliar indebidamente a **una ciudadana**, sin demostrar el acto volitivo de ésta tanto de inscribirse en su padrón de militantes como de haber proporcionado sus datos personales para ese fin.

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en garantizar el derecho de libre afiliación y la protección de los datos personales de los ciudadanos mexicanos y que la conducta se acredita ante la ausencia de los documentos atinentes que permitan demostrar el acto de voluntad de la ciudadana quejosa de militar en el citado partido político, ni para el uso de sus datos personales.

2. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A. Reincidencia

Por cuanto a la **reincidencia** en que pudo haber incurrido el partido materia de esta Resolución, este organismo electoral autónomo considera que **no se actualiza**.

De conformidad con el artículo 355 párrafo 6 del *COFIPE*, cuyo contenido reproduce el diverso 458, párrafo 6, de la *LGIPE*, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el mencionado *Código*, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, la *Sala Superior* ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);
2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
3. Que en ejercicios anteriores el infractor **haya sido sancionado por esa infracción mediante Resolución o sentencia firme.**

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por la Sala Superior, a través de la Jurisprudencia 41/2010, cuyo rubro es: **REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.**¹⁸

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con anterioridad.

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia firme, incurra nuevamente en la comisión de la misma falta.

¹⁸ De observancia obligatoria, en términos del artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En este sentido, debe precisarse que en el presente asunto, no puede considerarse actualizado dicho supuesto por cuanto hace al *PT*, pues en los archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya sancionado a ese ente político por la falta como la que se sanciona por esta vía, que se hayan dictado con anterioridad a los hechos materia de las presentes denuncias.

B. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de la ciudadana al partido político denunciado, pues se comprobó que el *PT* afilió a la *quejosa*, sin demostrar contar con la documentación que acredite que medió la voluntad de tal ciudadana de pertenecer o estar inscrita a dicho instituto político.
- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, de optar por ser o no militante de algún partido político, y la obligación de éstos de velar por el debido

respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.

- Para materializar la indebida afiliación de la denunciante, se utilizaron indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para formar los padrones de afiliados del partido político denunciado.
- No existió un beneficio por parte del *PT*, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral.
- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso Electoral.
- No existe reincidencia por parte del *PT*.

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente **calificar la falta** en que incurrió el partido político como de **gravedad ordinaria**, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el *PT*, dolosamente, infringió el derecho de libre afiliación de la hoy quejosa, lo que constituye violación a un derecho fundamental de la ciudadana, reconocido en la Constitución.

C. Sanción a imponer

Ahora bien, la mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción.

Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y

lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor cuantía¹⁹.

El artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIPE*, dispone el catálogo de sanciones a imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México; reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita; y en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la *Constitución* y de la *LGIPE*, con la cancelación de su registro como partido político.

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción (especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción acreditada), así como la conducta realizada por el *PT en el caso concreto*, se determina que debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida.

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la *LGIPE*, confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor y que, a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realicen una falta similar.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no

¹⁹ Véase la tesis XXVIII/2003 de la Sala Superior, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LCPS/JL/NAY/219/2018

resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que ni el *COFIPE* ni la *LGIPE* determinan pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo establece las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

Con base en lo anterior, este *Consejo General* estima que, derivado de las circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida al partido político denunciado, justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 354, párrafo 1, inciso a) del **COFIPE**, cuyo contenido se replica en el diverso 456, párrafo 1, inciso a, fracción II, de la **LGIPE**, consistente en una **MULTA unitaria por cuanto hace a la ciudadana sobre quien se cometió la falta acreditada**, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto.

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la sanción a imponer.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LCPS/JL/NAY/219/2018

En este orden de ideas, es pertinente hacer notar, que ha sido criterio de esta autoridad, al resolver los procedimientos UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y su acumulado, y UT/SCG/Q/MECG/JD06/CHIH/4/2016, el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis y siete de marzo de dos mil diecisiete, respectivamente —y que fue reiterado en el diverso SCG/Q/FSG/CG/33/INE/80/2014 Y SU ACUMULADO SCG/Q/JAEB/JL/CHIH/37/INE/84/2014, resuelto por este órgano máximo de dirección el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, bajo la clave INE/CG401/2017—, en los que se sancionó por una indebida afiliación de un ciudadano, en cada caso, con una multa equivalente a 642 (seiscientos cuarenta y dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento de la comisión de la conducta, sanción que se estima debe tomarse como base para el presente asunto, si se considera que en dichos asuntos se demostró la comisión de una infracción similar a la que acontece en los casos que aquí se resuelven.

En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta causa, es claro que la individualización de la sanción aplicada con motivo de la afiliación indebida de la ciudadana al partido político denunciado, debe resultar proporcional, sin perder de vista las condiciones socioeconómicas del instituto político, y no simplemente, los hechos denunciados y acreditados en el presente procedimiento, a fin de que la sanción que se imponga resulte efectivamente proporcional sin ser excesiva.

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad debe determinar su monto o cuantía, **tomando en cuenta** las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que corresponda.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión que tiene sustento en la tesis relevante XXVIII/2003,²⁰ emitida por la Sala Superior, misma que a letra dice:

SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.- *En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.*

Ahora bien, a juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con base en lo dispuesto en la fracción II del numeral citado, lo procedente es imponer una **multa** equivalente a **seiscientos cuarenta y dos** días de salario mínimo general para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) al **PT, por la afiliación de una ciudadana**, conducta que se acreditó en el presente asunto.

En virtud de que, como se estableció con anterioridad, la temporalidad en que se llevó a cabo la conducta denunciada corresponde al uno de febrero de dos mil ocho, para el cálculo de la multa correspondiente, se debe tomar en cuenta el salario mínimo vigente al momento de realizar la afiliación y, obtenido el monto correspondiente, deberá hacerse la conversión a Unidades de Medida y Actualización.

²⁰ Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 7, Año 2004, página 57

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LCPS/JL/NAY/219/2018

Al respecto, es un hecho notorio que se invoca en términos de lo establecido en el artículo 358 del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 461 de la *LGIPE*, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fija anualmente los montos respectivos, mismos que al ser relacionados con las fechas de afiliación, para obtener la sanción que corresponde por cuanto a la ciudadana indebidamente afiliada, arroja lo siguiente:

<i>PT</i>		
Total de quejosos	Salario mínimo	Monto en pesos
Afiliación 2008		
1	\$52.59	\$33,762.78
TOTAL		\$33,762.78
[Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].		

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, pues sin ser gravosa, sí puede inhibir al *PT* para que en el futuro vigile el cumplimiento de las normas de la materia.

Ahora bien, es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la *Constitución* —efectuada por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones.

En esas condiciones, lo procedente es transformar la sanción que se considera idónea, construida a partir de la referencia legal de salarios mínimos, a Unidades de Medida y Actualización, para lo cual es necesario dividir el monto base establecido (la suma de multiplicar seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México por el salario mínimo vigente en cada año correspondiente a la afiliación), entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, misma que equivale, para el ejercicio fiscal en curso, a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M. N.).

De esta manera, al aplicar la fórmula mencionada, respecto de la ciudadana que fue afiliada indebidamente por el *PT*, se obtiene lo siguiente:

Ciudadana Leticia Concepción Pérez Saucedo, afiliada en el año 2008.

El monto en pesos \$33,762.78 (que se obtiene de la referencia establecida en precedentes, de seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente, multiplicado por el salario mínimo del año en que se realizó la afiliación, 2008, esto es, \$52.59 —cincuenta y dos pesos 59/100 M. N.—) se divide entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, correspondiente a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.), y se obtiene que la sanción a imponer es una multa equivalente a 418.89 (**cuatrocientos dieciocho punto ochenta y nueve**) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal; dicha cantidad resulta ser la sanción correspondiente respecto del ciudadano en cita, y su valor neto en pesos es de **\$33,762.53 (treinta y tres mil setecientos sesenta y dos pesos 53/100 M.N., redondeado al segundo decimal).**

Entonces, al *PT* se habrá de aplicar una sanción, como se ha explicado y se resume enseguida:

No	Ciudadano	Año de afiliación	Salario Mínimo	Multa en UMAS	Multa en pesos
1	Leticia Concepción Pérez Saucedo	2008	\$52.59	418.89	\$33,762.53

Debe precisarse que se considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, ya que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, se concluye que las mismas resultan eficaces y proporcionales.

Sirve de apoyo a los anteriores razonamientos, la tesis de jurisprudencia 10/2018, emitida por la Sala Superior, de rubro y texto:

MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.- De la interpretación sistemática de los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, transitorios segundo y tercero del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como 44, párrafo primero, inciso aa), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando en consideración el principio de legalidad que rige en los procedimientos sancionadores, se advierte que el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del ilícito.

D. EL MONTO DEL BENEFICIO, LUCRO, DAÑO O PERJUICIO ECONÓMICO DERIVADO DE LA INFRACCIÓN

Se estima que, respecto de la infracción cometida por parte del *PT*, aun cuando causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de la infracción.

E. Las condiciones socioeconómicas del infractor

Al respecto, resulta necesario precisar que, conforme con la información proporcionada por la *DEPPP*, a través del oficio **INE/DEPPP/DE/DPPF/5693/2018**, el monto de la ministración mensual para el sostenimiento de actividades ordinarias correspondientes al mes de septiembre de dos mil dieciocho para el *PT*—una vez deducidos los conceptos correspondientes a multas y sanciones— es de \$9,868,515.00 (nueve millones ochocientos sesenta y ocho mil quinientos quince pesos 00/100 m.n.).

F. Impacto en las actividades del sujeto infractor

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta al *PT*, no es de carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida, respecto al monto del financiamiento que recibirá por concepto de actividades ordinarias permanentes en el mes de septiembre del año en curso, equivale al siguiente porcentaje:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LCPS/JL/NAY/219/2018

Partido político	Año	Monto de la sanción por ciudadano. ²¹	Ciudadanos indebidamente afiliados	% de la ministración mensual por ciudadano
PT	2008	\$33,762.53	1	0.34%

Por consiguiente, la sanción impuesta al *PT* no es de carácter gravoso, si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual correspondiente al mes de septiembre de este año.

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción cometida por el *PT* (especialmente los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con el financiamiento que recibe del *INE* para el mes de septiembre de dos mil dieciocho, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político sancionado.

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el partido político de mérito —tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagar sin que ello afecte sus operaciones ordinarias, además de que las sanciones son proporcionales a las faltas cometidas y se estima que, sin resultar excesivas ni ruinosas, pueden generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la *Sala Superior* en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-250/2009²², es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

QUINTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE LA QUEJOSA COMO MILITANTE.

En tal sentido, se tiene que la voluntad de la denunciante es no pertenecer al *PT*, por lo que se debe vincular al partido político, para que, en el supuesto que Leticia Concepción Pérez Saucedo continúe en su padrón de militantes, **sin mayor**

²¹ Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.

²² Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://portal.te.gob.mx/coleccion/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm>

trámite, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución**, con efectos a partir de la fecha en que presentó su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la *UTCE*, los medios de prueba que amparen el cumplimiento.

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017,²³ de cinco de enero del año en curso, sentencia en la que se concluyó la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el *INE*, que lo vincule con un instituto político en particular.

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la Constitución Federal,²⁴ se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el numeral 42 de la Ley de Medios.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara **fundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra del *PT*, por lo que respecta a Leticia Concepción Pérez Saucedo, en términos del Considerando **TERCERO** de esta Resolución.

²³ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/JDC/2/SUP_2017_JDC_2-626321.pdf

²⁴ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: II5I. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª), Página: 2864, Rubro: “**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.**”

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LCPS/JL/NAY/219/2018

SEGUNDO. En términos del Considerando **CUARTO** de la presente Resolución, se impone al *PT*, **una multa en los términos que enseguida se precisan, respecto de la ciudadana de la que se acreditó la falta ya señalada:**

No	Ciudadana	Importe de la Multa
1	Leticia Concepción Pérez Saucedo	418.89 (cuatrocientos dieciocho punto ochenta y nueve) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$33,762.53 (Treinta y tres mil setecientos sesenta y dos pesos 53/100 M.N.) [ciudadana afiliada en 2008]

TERCERO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7 de la LGIPE, el monto de la multa impuesta al *PT*, será deducido, según corresponda, de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciban dichos institutos políticos, una vez que esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su Considerando **CUARTO**.

CUARTO. Se vincula al *PT* para que, en el supuesto que la quejosa continúe en su padrón de militantes, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución**, con efectos a partir de la fecha en que presentó su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la *UTCE*, los medios de prueba que amparen el cumplimiento, conforme lo dispuesto en el Considerando **QUINTO**.

QUINTO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42 de la Ley de Medios.

Notifíquese personalmente a Leticia Concepción Pérez Saucedo; así como al *PT*, por conducto de su representante ante este Consejo General; y por **estrados** a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Por lo que hace a los apartados 1.3, 1.4, 1.5, 1.15 y 1.16, votaríamos primero en lo general, separando de esta votación en lo general por lo que hace al criterio de reiteración, e incluyendo, entiendo, en lo general lo que tiene que ver con la especificación de los efectos de la baja, como el resto de los Proyectos de Resolución. _____

¿De acuerdo? _____

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general, los Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificados en el orden del día, como los apartados 1.3, 1.4, 1.5, 1.15 y 1.16, incluyendo, en el caso de estos 2 últimos lo que tiene que ver para efectos de la baja y separando de los 5 el criterio de reiteración, tomando en cuenta la fe de erratas de los apartados 1.15 y 1.16. _____

Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo general en estos términos, sírvanse a manifestarlo. __

Aprobados por unanimidad en lo general (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello). _____

Ahora, por lo que hace a estos 5, como viene el Proyecto de Resolución con el criterio de reiteración, como viene el Proyecto de Resolución. _____

Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo. _____

8 votos. _____

¿En contra? _____

3 votos. _____

Aprobados por 8 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 3 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero Presidente. _____

(Texto de las Resoluciones aprobadas INE/CG1240/2018, INE/CG1241/2018, INE/CG1242/2018, INE/CG1243/2018 e INE/CG1244/2018) Ptos. 1.3, 1.4, 1.5, 1.15 y 1.16__

INE/CG1240/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ORDINARIO
DENUNCIANTES: ADRIANA OSUNA
SALAZAR Y OTROS.
DENUNCIADO: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/AOS/CG/52/2017, INICIADO CON MOTIVO DE SENDAS DENUNCIAS EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA INDEBIDA AFILIACIÓN AL CITADO INSTITUTO POLÍTICO DE DIVERSOS CIUDADANOS Y, EN SU CASO, EL USO NO AUTORIZADO DE SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 12 de septiembre de dos mil dieciocho.

GLOSARIO	
COFIPE	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Comisión de Quejas	Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
DEPPP	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
INE	Instituto Nacional Electoral
LGIPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
LGPP	Ley General de Partidos Políticos
PAN	Partido Acción Nacional

GLOSARIO	
<i>Reglamento de Quejas</i>	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>Sala Superior</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>Tribunal Electoral</i>	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

R E S U L T A N D O

1. DENUNCIAS. En las fechas que a continuación se citan, se recibieron tres escritos de queja signados por igual número de ciudadanos quienes, en esencia, alegaron la posible indebida afiliación de estos, atribuida al *PAN* y, en su caso, el uso de sus datos personales para tal fin:

No.	Quejoso	Fecha de presentación
1	María Flor Felicitos Martínez	31/octubre/2017 ¹
2	Adriana Osuna Salazar	30/octubre/2017 ²
3	Gisel Vázquez Déciga	07/diciembre/2017 ³

2. REGISTRO, ADMISIÓN Y RESERVA DEL EMPLAZAMIENTO.⁴ Mediante proveídos de primero y catorce de diciembre de dos mil diecisiete, el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral instruyó el registro del procedimiento sancionador ordinario, al cual se le asignó la clave **UT/SCG/Q/AOS/CG/52/2017**, por la presunta indebida afiliación y el uso de datos personales por parte del *PAN*.

En los acuerdos en cita, se admitieron a trámite las quejas que dieron origen al procedimiento de sanción señalado con anterioridad y se ordenó reservar lo conducente respecto al emplazamiento, hasta en tanto fueran compiladas y

¹ Visible a página 1-4 del expediente

² Visible a páginas 6-7 del expediente

³ Visible a página 70-74 del expediente

⁴ Visibles a páginas 8-15 y 82-94 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AOS/CG/52/2017

analizadas las constancias que integrarían dicho expediente, y se determinara la pertinencia o no de la realización de nuevas diligencias de investigación.

3. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.⁵ Con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, los días primero y catorce de diciembre de dos mil diecisiete, se emitieron acuerdos en los que requirió a la *DEPPP* y al *PAN*, proporcionaran información relacionada con la presunta afiliación de los tres denunciantes, lo cual fue desahogado como se muestra a continuación:

Fecha de acuerdo	Sujeto requerido	Oficio	Fecha de Respuesta
01/12/2017	<i>DEPPP</i>	INE-UT/9044/2017 ⁶	05/12/2017 Correo institucional ⁷
	<i>PAN</i>	INE-UT/9045/2017 ⁸	07/12/2017 Escrito ⁹
14/12/2017	<i>DEPPP</i>	INE-UT/9426/2017 ¹⁰	19/12/2017 Correo institucional ¹¹
	<i>PAN</i>	INE-UT/9427/2017 ¹²	20/12/2017 Escrito ¹³

4. EMPLAZAMIENTO.¹⁴ El treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, se ordenó emplazar al *PAN*, como sujeto denunciado, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas que estimara pertinentes. Dicha diligencia se desarrolló conforme a lo siguiente:

Denunciado	Oficio	Citatorio – Cédula – Plazo	Contestación al Emplazamiento
<i>PAN</i>	INE-UT/1107/2018 ¹⁵	Cédula: 02/febrero/2018 Plazo: 06 al 12 de febrero de 2018	13/febrero/2018 ¹⁶

⁵ Visible a páginas 8-15 y 82-94 del expediente.

⁶ Visible a página 23 del expediente.

⁷ Visible a páginas 32-33 del expediente

⁸ Visible a página 24 del expediente.

⁹ Visible a páginas 44-68 del expediente.

¹⁰ Visible a página 129 del expediente.

¹¹ Visible a páginas 154-156 del expediente

¹² Visible a página 130 del expediente.

¹³ Visible a páginas 159-161 del expediente

¹⁴ Visible a páginas 175-180 del expediente

¹⁵ Visible a página 185 del expediente

¹⁶ Visible a páginas 193-196 del expediente y sus anexos a páginas 197-199

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AOS/CG/52/2017

5. ALEGATOS.¹⁷ El diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a las partes, a efecto que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera, acuerdo que fue notificado y desahogado conforme al siguiente cuadro:

Sujetos	Oficio	Citatorio – Cédula – Plazo	Contestación a los Alegatos
Denunciantes		Citatorio: No aplica Cédula: 22/febrero/2018 Plazo: 23 de febrero al 01 de marzo de 2018	No formuló alegatos
Adriana Osuna Salazar	INE/SIN/JDE01/VS/0134/2018 ¹⁸		
María Flor Felicitos Martínez	INE-UT/1749/2018 ¹⁹	Citatorio: No aplica Cédula: 22/febrero/2018 Plazo: 23 de febrero al 01 de marzo de 2018	No formuló alegatos
Gisel Vázquez Déciga	INE-UT/1750/2018 ²⁰	Citatorio: 22/febrero/2018 Cédula: 23/febrero/2018 Plazo: 26 de febrero al 02 de marzo de 2018	No formuló alegatos
Denunciado		Citatorio: 21/febrero/2018 Cédula: 22/febrero/2018 Plazo: 23 de febrero al 01 de marzo de 2018	No formuló alegatos
PAN	INE-UT/1748/2018 ²¹		

6. RECEPCIÓN DE DIVERSO ESCRITO DE QUEJA.²² Por acuerdo de cinco de marzo de dos mil dieciocho se tuvo por recibido y admitido el escrito de queja signado por Juan Manuel Orozco Morales, al que se le acompañó el correo institucional con número de gestión DEPPP-2017-8576, emitido por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, a través del cual remitió entre otras, información referente al citado quejoso, en relación al partido político al que se encuentra afiliado y la fecha de afiliación, procedentes del diverso procedimiento sancionador ordinario **UT/SCG/Q/JETB/CG/59/2017**, quien, en esencia, alega la presunta indebida afiliación de éste al *PAN* sin su consentimiento y, en su caso, la utilización de sus datos personales para tal fin.

¹⁷ Visible a páginas 200-203 del expediente.

¹⁸ Visible a páginas 234-237 del expediente.

¹⁹ Visible a páginas 207-212 del expediente.

²⁰ Visible a páginas 223-231 del expediente.

²¹ Visible a páginas 213-222 del expediente.

²² Visible a páginas 261-268 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AOS/CG/52/2017

En mismo acuerdo se requirió información al citado instituto político para que remitiera información relacionada con la presunta afiliación del quejoso Juan Manuel Orozco Morales, lo cual fue desahogado como se muestra a continuación:

Fecha de acuerdo	Sujeto requerido	Oficio	Fecha de Respuesta
05/03/2018	PAN	INE-UT/2162/2018 ²³	08/03/2018 Escrito ²⁴

7. ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO.²⁵ El veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, se ordenó emplazar al PAN, como sujeto denunciado por Juan Manuel Orozco Morales, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas que estimara pertinentes. Dicha diligencia se desarrolló conforme a lo siguiente:

Denunciado	Oficio	Citatorio – Cédula – Plazo	Contestación al Emplazamiento
PAN	INE-UT/3887/2018 ²⁶	Citatorio: 29/marzo/2018 Cédula: 30/marzo/2018 Plazo: 02 al 06 de marzo de 2018	No contestó

8. ALEGATOS.²⁷ El trece de abril de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista al Partido Acción Nacional así como a Juan Manuel Orozco Morales, a efecto que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera, acuerdo que fue notificado y desahogado conforme al siguiente cuadro:

Sujetos	Oficio	Citatorio – Cédula – Plazo	Contestación a los Alegatos
Denunciante	INE/MICH/CD07/S/174/2018 ²⁸	Citatorio: No aplica Cédula: 18/abril/2018 Plazo: 19 al 25 de abril de 2018	Escrito ²⁹ 19/abril/2018
Juan Manuel Orozco Morales			
Denunciado	INE-UT/4594/2018 ³⁰	Citatorio: No aplica Cédula: 17/abril/2018 Plazo: 18 al 24 de abril de 2018	Oficio RPAN2-0188/2018 ³¹ 24/abril/2018
PAN			

²³ Visible a página 274-276 del expediente.

²⁴ Visible a páginas 277-278 del expediente.

²⁵ Visible a páginas 290-296 del expediente.

²⁶ Visible a página 302-313 del expediente.

²⁷ Visible a páginas 316-319 del expediente.

²⁸ Visible a páginas 328-335 del expediente.

²⁹ Visible a páginas 336 del expediente.

³⁰ Visible a páginas 323-327 del expediente.

³¹ Visible a páginas 338-340 del expediente.

9. ELABORACIÓN DEL PROYECTO. En su oportunidad, toda vez que no había diligencias pendientes por desahogar, se ordenó la elaboración del Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la *Comisión*.

10. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS. En la Octogésima Cuarta Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el seis de septiembre de dos mil dieciocho, la *Comisión de Quejas* aprobó el proyecto de mérito, por unanimidad de votos de sus integrantes; y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión de Quejas*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte del *PAN*, en perjuicio de los ciudadanos que han sido señalados a lo largo de la presente determinación.

Ahora bien, conforme al artículo 23 del *COFIPE*, los partidos políticos ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en el citado Código, correspondiendo al Instituto Federal Electoral —hoy INE— vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n); y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho Código, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38, del dispositivo legal en cita, las cuales son sancionables por el Consejo General.

Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443 párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la *LGIE* y 25, de la *Ley de Partidos*, respectivamente.

En consecuencia, siendo atribución del *Consejo General* conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta competente para conocer y resolver respecto de las presuntas infracciones denunciadas en el procedimiento sancionador ordinario, atribuidas al *PAN*, derivado, esencialmente, de la indebida afiliación al citado instituto político.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,³² en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.

³² Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de ciudadanos.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIPE* —los cuales contienen reglas que ya se encontraban previstas en el *COFIPE*, en los artículos 342, párrafo 1, incisos a); 356, 361, 364, 365 y 366—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO

En el presente asunto se debe subrayar que las presuntas faltas (indebida afiliación) se cometieron **durante la vigencia del COFIPE**, puesto que en todos los casos el registro o afiliación de los quejosos al *PAN* se realizó antes del treinta y uno de marzo de dos mil catorce, fecha en la cual se encontraba vigente dicho código.

En efecto, de conformidad con lo establecido en el Punto cuarto de los Lineamientos para la Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su registro, aprobados por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG617/2012, de treinta de agosto de dos mil doce, los Partidos Políticos Nacionales debían capturar en el *Sistema de Cómputo desarrollado por la Unidad Técnica de Servicios de Informática*, los datos de todos sus afiliados en el periodo comprendido **entre el uno de abril de dos mil trece y el treinta y uno de marzo de dos mil catorce**, siendo que el registro realizado en ese periodo corresponden las más recientes fechas de alta de los quejosos en el *PAN*.

Por tanto, si al momento de la comisión de las presuntas faltas se encontraba vigente el *COFIPE*,³³ es claro que este ordenamiento legal debe aplicarse para las cuestiones sustantivas del presente procedimiento, al margen que las faltas pudieran haber sido advertidas por los quejosos y cuestionadas mediante las quejas que dieron origen al presente asunto, una vez que dicha norma fue abrogada por la *LGIPE*, así como que este último ordenamiento sea fundamento para cuestiones procesales o adjetivas.

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO

1. FIJACIÓN DE LA LITIS

En el presente asunto se debe determinar si el *PAN* afilió indebidamente o no a los ciudadanos que alegan no haber dado su consentimiento para estar en sus filas, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), y u) de la *LGPP*.

2. MARCO NORMATIVO

A) Constitución, tratados internacionales y ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

³³ El *COFIPE* estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: ...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. *Son derechos del ciudadano:*

...

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no sólo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracción I, párrafo segundo, *in fine*, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, *in fine*, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un

sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 24/2002 emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES**.³⁴

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,³⁵ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos,

³⁴ Consultable en la página: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

³⁵ Consultable en la página https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes —asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

***Artículo 23.** Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:*

I...

***II.** Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:*

***1.** Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:*

***a.** En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y*

***b.** El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.*

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que, en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;
- Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);

- Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGPE*, que es obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* del *IFE* por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *H. Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su constitución y registro.

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AOS/CG/52/2017

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.
- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que, en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron

ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna del PAN

Como se ha mencionado anteriormente, la obligación de los partidos políticos de garantizar el derecho de libre afiliación de sus agremiados, deviene de las propias disposiciones constitucionales, legales y convencionales a que se ha hecho referencia párrafos arriba, por tanto, su cumplimiento, en modo alguno, se encuentra sujeto a las disposiciones internas que cada instituto tiene en su haber normativo.

No obstante, a efecto de tener claridad acerca del proceso que un ciudadano debe llevar a cabo para convertirse en militante del partido político ahora denunciado, se hace necesario analizar la norma interna del PAN, para lo cual, enseguida se transcribe la parte conducente de sus Estatutos, en los términos siguientes:³⁶

³⁶ Consultable en la página de internet del PAN, o bien en la dirección electrónica <http://actores-politicos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/nacionales/documentos-basicos/#!/pan>

Estatuto del PAN

Artículo 8

1. Son militantes del Partido Acción Nacional, los ciudadanos mexicanos que de forma directa, personal, presencial, **individual, libre**, pacífica y voluntaria, **manifiesten su deseo de afiliarse**, asuman como propios los principios, fines, objetivos y documentos básicos del Partido Acción Nacional, y sean aceptados con tal carácter.

...

Artículo 9

1. El procedimiento de afiliación se regirá conforme a lo previsto en el Reglamento correspondiente. La solicitud se presentará por escrito y podrá realizarse ante cualquier Comité del Partido de la entidad federativa correspondiente, independientemente donde se encuentre su domicilio. Los mexicanos residentes en el extranjero, se podrán afiliar fuera del territorio nacional.

...

Artículo 10

1. Para ser militante, se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Ser ciudadano mexicano;**
 - b) Tener un modo honesto de vivir;**
 - c) Haber participado en la capacitación coordinada o avalada por el área correspondiente del Comité Ejecutivo Nacional;**
 - d) Suscribir el formato aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional**, acompañando copia de su credencial para votar con fotografía vigente, emitida por el Instituto Nacional Electoral; en el caso de mexicanos que residan en el extranjero, podrán acompañar copia de la matrícula consular.
- ...

De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente:

- El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, fundamentalmente, en la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para decidir **libre e individualmente** si desean formar parte de los partidos y agrupaciones políticas.
- Afiliado o Militante es el ciudadano que libre, voluntaria e individualmente, acude a un partido político para solicitar su incorporación al padrón de militantes

respectivo, a través de los documentos aprobados por los órganos partidistas correspondientes.

- Al *PAN* podrán afiliarse los ciudadanos que, libre e individualmente, expresen su voluntad de integrarse al partido.
- Para obtener la afiliación al partido de referencia, se requiere, además de ser ciudadano mexicano y expresar **su voluntad libre, individual y pacífica de afiliarse** al Partido, **suscribir personalmente** la solicitud de alta como militante.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán contemplar en sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos.

D) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

3. CARGA Y ESTANDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante del *PAN*, por regla general debe acudir a las instancias partidistas competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso en particular el *PAM*), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del *COFIPE*, precepto que, derivado de la reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la *LGPP*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que además los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y voluntaria.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir

del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la Sala Superior, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**,³⁷ donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Jurisprudencia 21/2013, de rubro: **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,³⁸ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria³⁹ y como estándar probatorio⁴⁰.

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación⁴¹ ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada

³⁷ http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

³⁸ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60

³⁹ Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

⁴⁰ Véase la jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. ²² Véase la nota 35.

⁴¹ Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO**.

por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la Sala Superior consideró en la sentencia referida, que, para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la *Ley de Medios*, con fundamento en el diverso 441 de la *LGIPE*, lo que implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento ordinario sancionador una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino que conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas

partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

Otro aspecto importante a tomar en consideración, radica en que, si el partido político cumple con la carga probatoria que corresponde a su afirmación en el sentido de que la afiliación cuestionada estuvo precedida del consentimiento del quejoso, es decir, si exhibe prueba suficiente sobre la legitimidad de la afiliación motivo de queja, debe considerarse que prevalece el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio.

Al respecto, cabe destacar que, si la autenticidad o el contenido de dicho documento es cuestionado por el quejoso, se debe estar a las disposiciones contenidas en la *LGIPE* y el *Reglamento de Quejas*, las cuales aluden a las reglas que deben

observarse tratándose de la objeción de documentos, como parte del derecho contradictorio que les asiste a las partes, de oponerse o refutar las pruebas que ofrezcan o que se allegue la *Unidad Técnica* durante la secuela de un procedimiento ordinario sancionador.

Así, el artículo 24 del citado cuerpo normativo establece que:

- 1. Las partes podrán objetar las pruebas ofrecidas durante la sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores **ordinario** y especial, siempre y cuando se realice antes de la audiencia de desahogo.*
- 2. Para los efectos de lo señalado en el párrafo que antecede, las partes podrán objetar la autenticidad de la prueba o bien su alcance y valor probatorio **debiendo indicar** cuál es el aspecto que no se reconoce de la prueba o por qué no puede ser valorado positivamente por la autoridad, esto es, el motivo por el que a su juicio no resulta idóneo para resolver un punto de hecho.*
- 3. Para desvirtuar la existencia o verosimilitud de los medios probatorios ofrecidos, no basta la simple objeción formal de dichas pruebas, sino que es necesario señalar las razones correctas en que se apoya la objeción **y aportar elementos idóneos para acreditarlas, mismos que tenderán a invalidar la fuerza probatoria de la prueba objetada.***

[Énfasis añadido]

Esto es, de conformidad con el precepto reglamentario previamente transcrito, **no basta con objetar de manera formal el medio de prueba ofrecido por el partido político para desvirtuar la existencia o verosimilitud de la constancia de afiliación, sino que es necesario señalar las razones correctas en que se apoya la objeción y, también, aportar en el momento procesal oportuno, los elementos idóneos para acreditar su objeción.**

Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia **4/2005**⁴² de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes:

DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA

⁴² Jurisprudencia 1a./J. 4/2005, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Página 266.

PLANTEA (LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y PUEBLA, ESTA ÚLTIMA ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1998). *En términos de lo dispuesto por los artículos 324 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 330 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, los documentos privados provenientes de las partes deben ser reconocidos expresa o tácitamente para que adquieran el valor probatorio que las propias legislaciones les otorgan. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio reiterado de que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que es necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción. Debido a que en las legislaciones adjetivas en cuestión no se establece ninguna regla específica sobre la carga probatoria en la hipótesis apuntada, para saber a quién corresponde dicha carga de la prueba sobre la objeción formulada, deben atenderse los hechos en que se funde la misma, aplicándose las reglas genéricas establecidas en los artículos 289 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 263 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, en cuanto a que a cada parte corresponde probar los hechos de sus pretensiones. Por tanto, si la objeción de un documento privado proveniente de los interesados base de sus pretensiones se funda en la circunstancia de no haber suscrito el documento el objetante, a él corresponde la carga de la prueba. Dicho de otra forma, quien invoca una situación jurídica está obligado a probar los hechos fundatorios en que aquélla descansa; por lo contrario, quien sólo quiere que las cosas se mantengan en el estado que existen en el momento en que se inicia el juicio, no tiene la carga de la prueba, pues desde el punto de vista racional y de la lógica es evidente que quien pretende innovar y cambiar una situación actual, debe soportar la carga de la prueba.*

[Énfasis añadido]

Bajo ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió, en concordancia con los preceptos invocados en líneas que anteceden, que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que debe ser necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción, es decir, que al objetante corresponde la carga de la prueba.

A efecto de robustecer lo anterior, se citan criterios de diversos Tribunales Colegiados de Circuito, en los que se han pronunciado en tal sentido sobre el tema:

- **DOCUMENTOS PRIVADOS. OBJECIÓN A LOS.**⁴³

⁴³ Jurisprudencia I.3Oc. J/8, Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, Página 423.

- **DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. CONFORME AL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA.**⁴⁴
- **DOCUMENTOS PRIVADOS. PARA NEGARLES VALOR PROBATORIO, NO BASTA LA SIMPLE OBJECCIÓN, SINO QUE DEBEN SEÑALARSE LAS CAUSAS EN QUE LA FUNDE Y DEMOSTRARLAS.**⁴⁵
- **DOCUMENTOS PRIVADOS, CARGA DE LA PRUEBA EN CASO DE OBJECCIÓN A LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)**⁴⁶
- **DOCUMENTOS PRIVADOS. CARGA DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR LA OBJECCIÓN RESPECTO DE LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA CONTENIDA EN ELLOS**⁴⁷
- **DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)**⁴⁸

De igual forma, resulta aplicable la Jurisprudencia **I.3o.C. J/11**,⁴⁹ dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes:

⁴⁴ Tesis Aislada XV.4o.12 C, Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, Página 3128.

⁴⁵ Jurisprudencia III. 1Oc. J/17, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Número 63, Marzo de 1993, Página 46.

⁴⁶ Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Agosto de 1993, Página 422.

⁴⁷ Tesis XXXI.3º 8 L, Tercer Tribunal Colegiado de Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, Página 1254.

⁴⁸ Tesis II. o C, 495 C, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Página 1454.

⁴⁹ Tesis I.3o. C J/11, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de 1997, Página 615.

DOCUMENTOS PRIVADOS INSUFICIENTEMENTE OBJETADOS POR EL PROPIO FIRMANTE, VALOR PROBATORIO DE LOS. *En tratándose de documentos privados, debe hacerse la distinción entre aquellos que provienen de terceras personas y los que se atribuyen a las partes litigantes en la controversia. Respecto de los primeros, basta la objeción del instrumento privado, debidamente razonada, para que pierda su valor probatorio, quedando a cargo del oferente la carga de la prueba y apoyar su contenido aportando otros elementos de convicción, y en relación con el segundo supuesto, para tener por satisfecho lo dispuesto por el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es menester que **la parte a quien perjudique realice en tiempo, forma y suficiencia la objeción, para que pierda su alcance probatorio dicho instrumento. De esta manera, se tiene que si en un caso la contraparte del oferente, al dársele vista con el documento exhibido, se limitó a manifestar que no lo había firmado, tal aseveración no pudo constituir la causa suficiente de objeción que demeritara el alcance de esa probanza, ya que para tal efecto resulta indispensable que existan causas motivadoras de la invalidez de la prueba y que se aportaran las pruebas idóneas para tal fin, como pudieron ser las periciales grafoscópicas, grafológicas y caligráficas; elementos que no se rindieron para acreditar la impugnación, como lo dispone el artículo 341 del código citado.***

[Énfasis añadido]

En igual sentido, el Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito en la Jurisprudencia **III.1o.C. J/29**,⁵⁰ sostuvo el referido criterio en el siguiente sentido:

DOCUMENTOS PRIVADOS, PRUEBA DE LA FALSEDAD DE LA FIRMA DE LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). *Una interpretación armónica de los artículos 342, 343, 344, 345, 346 y 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, lleva a concluir que cuando **se objeta la autenticidad de la firma de un documento privado es necesario pedir el cotejo de la misma con una señalada como indubitable; además, debe ofrecerse la prueba pericial respectiva, dado que la falsificación de la firma es un punto que sólo puede ser determinado por una persona con conocimientos especiales en la materia, es decir, por un perito grafoscopista, aun cuando exista diferencia notoria entre las firmas cuestionadas, porque tal circunstancia, por sí sola, no revela lo apócrifo de una de ellas, sino únicamente la diferencia entre ambas.***

[Énfasis añadido]

⁵⁰ Jurisprudencia III.1o.C. J/29, Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Página 680.

Lo anterior, en suma, significa que para destruir la presunción de inocencia que surge en favor del denunciado cuando aporta elementos de prueba idóneos para demostrar que la afiliación cuestionada estuvo precedida de la manifestación de voluntad del quejoso, tal como las constancias de afiliación correspondientes, o bien, elementos que pongan de manifiesto que el quejoso realizó hechos positivos derivados de su militancia, no basta que, de manera abstracta y genérica, el quejoso afirme que dichos medios de convicción no son veraces o auténticos.

Lo anterior, atento que, conforme a la normatividad que rige los procedimientos sancionadores electorales y que inexcusablemente está obligado a seguir este Consejo General, resulta imperativo que quien objeta un medio de prueba, señale específicamente cuál es la parte que cuestiona, y al efecto aporte, o cuando menos señale, conforme a la regla general relativa a que a quien afirma le corresponde probar —vigente en los procedimientos sancionadores electorales conforme a lo establecido por la Sala Superior—, los elementos objetivos y ciertos que puedan conducir a destruir la eficacia probatoria de los elementos aportados por el denunciado en su defensa, pues de otra manera, el principio de presunción de inocencia deberá prevalecer apoyado en las evidencias allegadas al procedimiento por el presunto responsable.

4. HECHOS ACREDITADOS

Como se ha mencionado, las denuncias presentadas por los quejosos, versan sobre la supuesta violación a su derecho de libertad de afiliación, al ser incorporados al padrón del *PAN*, sin su consentimiento, así como la utilización de sus datos personales por dicho partido político para sustentar tal afiliación.

Ahora bien, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de la infracción denunciada, debe precisarse lo siguiente:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AOS/CG/52/2017

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP ⁵¹	Manifestaciones del Partido Político ⁵²
1	Adriana Osuna Salazar	30/octubre/2017 ⁵³	Afiliado 23/11/2013	<p>Baja 13/11/2017</p> <p>Informó que si fue militante, sin embargo, causo baja en fecha trece de noviembre de dos mil diecisiete, derivado de la aplicación del Programa Específico de Revisión, Verificación, Actualización, Depuración y Registro de Datos y Huellas Digitales en Sinaloa, sin que haya exhibido documento alguno que acredite la afiliación de la citada quejosa, lo que trato de justificar en términos del Acuerdo de la Comisión de Vigilancia del Registro Nacional de Miembros, de fecha nueve de agosto de dos mil trece, por el que se autorizó al Director del citado Registro Nacional, la destrucción del archivo muerto.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la denunciante es militante del PAN, que dicha ciudadana negó haberse afiliado a ese partido político y que éste no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida, no obstante que el partido político indicó que causó baja el trece de noviembre de dos mil diecisiete, en razón de que el denunciante manifestó que a la fecha de la presentación de la queja (30 de octubre de 2017), seguía apareciendo en el padrón de militantes del PAN, tal y como fue confirmado por la DEPPP, mediante informe rendido el seis de diciembre de dos mil diecisiete.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP ⁵⁴	Manifestaciones del Partido Político ⁵⁵
2	María Flor Felicitos Martínez	31/octubre/2017 ⁵⁶	Afiliado 06/12/2013	<p>Baja 31/10/2013</p> <p>Informó que si fue militante, sin embargo, causo baja en fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, derivado de la presentación de su renuncia a ese instituto político, sin que haya exhibido documento alguno que acredite la afiliación de la citada quejosa, lo que trato de justificar en términos del Acuerdo de la Comisión de Vigilancia del Registro Nacional de Miembros, de fecha nueve de agosto de dos mil trece, por el que se autorizó al Director del citado Registro</p>

⁵¹ Correo electrónico institucional de la DEPPP, visible a páginas 32-33 del expediente

⁵² Oficio s/n, visible a páginas 44-69 del expediente

⁵³ Visible a páginas 5-7 del expediente

⁵⁴ Correo electrónico institucional de la DEPPP, visible a páginas 32-33 del expediente

⁵⁵ Oficio s/n, visible a páginas 44-69 del expediente

⁵⁶ Visible a páginas 1-4 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AOS/CG/52/2017

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP ⁵⁴	Manifestaciones del Partido Político ⁵⁵
				Nacional, la destrucción del archivo muerto.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la denunciante es militante del PAN, que dicha ciudadana negó haberse afiliado a ese partido político y que éste no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida, no obstante que el partido político indicó que causó baja el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, en razón de que el denunciante manifestó que a la fecha de la presentación de la queja (31 de octubre de 2017), seguía apareciendo en el padrón de militantes del PAN, tal y como fue confirmado por la DEPPP, mediante informe rendido el seis de diciembre de dos mil diecisiete.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP ⁵⁷	Manifestaciones del Partido Político ⁵⁸
3	Gisel Vázquez Déciga	7/diciembre/2017 ⁵⁹	Afiliado 19/05/2004	<p>Baja 6/11/2014</p> <p>Informó que si fue militante, sin embargo, causo baja en fecha seis de noviembre de dos mil catorce, derivado de la presentación de su renuncia a ese instituto político, que la misma no aparece como militante en el registro del PAN, derivado del citado trámite de renuncia, y que el motivo por el cual sigue apareciendo en el padrón con el que cuenta el INE, se puede deber a que dicho padrón no se encuentre actualizado de manera posterior a la presentación y trámite de la referida renuncia, sin que haya exhibido documento alguno que acredite la afiliación de la citada quejosa.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PAN, que dicha ciudadana negó haberse afiliado a ese partido político y que éste no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida, no obstante que el partido político indicó que causó baja el seis de noviembre de dos mil catorce, en razón de que la denunciante manifestó que a la fecha de la presentación de la queja (7 de diciembre de 2017), seguía apareciendo en el padrón de militantes del PAN en el portal del INE, tal y como fue confirmado por la DEPPP, mediante informe rendido el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete.</p>				

⁵⁷ Correo electrónico institucional de la DEPPP, visible a páginas 154-156 del expediente

⁵⁸ Oficio RPA2-0291/2017, visible a páginas 159-161 del expediente

⁵⁹ Visible a páginas 70-75 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AOS/CG/52/2017

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP ⁶⁰	Manifestaciones del Partido Político ⁶¹
3	Juan Manuel Orozco Morales	23/noviembre/2017 ⁶²	Afiliado 28/12/2013	<p>Baja 6/11/2014</p> <p>Informó que después de realizar una búsqueda en el Registro Nacional de Militantes, se encontró al quejoso con fecha de inicio de militancia veintiocho de diciembre de dos mil trece, y trámite de actualización de datos el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete. Sin embargo se abstuvo de exhibir documento que acreditará la afiliación del citado quejoso, así como la actualización que refiere, lo que trato de justificar en términos del Acuerdo de la Comisión de Afiliación del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, de fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, por el que se autorizó al Director del Registro Nacional de Militantes, la destrucción del archivo muerto existente al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante es militante del PAN, que dicho ciudadano negó haberse afiliado a ese partido político y que éste no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida, no obstante que el partido político indicó que el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, dicho ciudadano realizó un trámite de actualización de datos, ya que igualmente se abstuvo de exhibir documento que acreditará tal afirmación.</p>				

Finalmente, debe precisarse que las constancias aportadas por la DEPPP, al ser documentos emitidos por autoridades dentro del ámbito de sus facultades, se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del *Reglamento de Quejas*, mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la *LGIPE* y 27, párrafo 2 del Reglamento citado; por tanto, tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

En el mismo tenor, las documentales allegadas al expediente por el partido político denunciado, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracción II del *Reglamento Quejas*; por lo que, por si mismas,

⁶⁰ Correo electrónico institucional de la DEPPP, visible a páginas 247-251 del expediente

⁶¹ Oficio RPA2-0092/2018, visible a páginas 277-278 del expediente

⁶² Visible a páginas 241-246 del expediente

carecen de valor probatorio pleno, y sólo alcanzarán ese grado cuando, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, generen convicción en este *Consejo General* sobre la veracidad de los hechos a que se refieren, ello al tenor de lo preceptuado en los artículos 462, párrafo 3 de la *LGIPE*, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención.

5. CASO CONCRETO

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por los quejosos, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5 del *COFIPE*, cuyo contenido se replica en el diverso 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, se debe verificar que esa situación antijurídica sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; es decir, partido político, candidato o, inclusive, cualquier persona física o moral; dicho de otra forma, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De esta forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

En tal sentido, por cuanto hace a la existencia del supuesto normativo, debe reiterarse, como se estableció en apartados previos, que desde hace décadas está reconocido en la legislación de este país, la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, y de igual manera, que las personas en este país tienen el derecho de que se proteja su información privada y sus datos personales, todo lo cual está previsto desde el nivel constitucional.

En el caso, si bien en el marco normativo se hace referencia a los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, identificados con el número de resolución CG617/2012 y, de igual manera se transcribe la parte de disposiciones estatutarias del partido político denunciado, relacionada con el procedimiento de afiliación, lo cierto es que, por el carácter constitucional de tales derechos, la existencia de los mismos —y las obligaciones correlativas a éstos—, no está condicionada al reconocimiento por parte de los sujetos obligados, en este caso, de los partidos políticos.

En otras palabras, si la libertad de afiliación política, en todas sus vertientes, es un derecho de los ciudadanos de este país desde hace varios decenios, resulta por demás evidente que las obligaciones de los partidos políticos que deriven de esta garantía -respetar la libertad de afiliación o, en su caso, la decisión de no pertenecer más a un partido, así como acreditar fehacientemente el consentimiento del ciudadano para cualquier caso- no debe estar sujeta o condicionada a que éstos establezcan en sus normas internas disposiciones encaminadas a su protección, es decir, esta carga que se les impone no depende del momento en el que los partidos políticos hayan incluido en sus normas internas la obligación de que la afiliación sea voluntaria.

Por cuanto hace al elemento subjetivo señalado líneas arriba, debe destacarse que, la autoridad, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

En principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento que formula en contra de la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde al quejoso.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la *Ley General del Sistema de Medios*, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 de la *LGIPE*.

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que contaba con el consentimiento de los quejosos para afiliarlos a su partido político, y no a los ciudadanos que negaron haber solicitado su inclusión en el padrón de militantes del PAN.

Así, como vimos en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, está demostrado a partir de la información proporcionada por la *DEPPP* que los ciudadanos denunciados se encontraron, en ese momento, como afiliados del *PAN*.

Por otra parte, el *PAN* no demuestra con medios de prueba, que la afiliación respectiva sea el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de los **cuatro** ciudadanos denunciados.

Debiendo precisar que la carga de la prueba corresponde al *PAN*, en tanto que el dicho de los denunciantes consiste en afirmar que no dieron su consentimiento para ser afiliados, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba.

En tanto que los partidos políticos, cuya defensa consiste básicamente en afirmar que sí cumplieron las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación, tienen el deber de probar mediante los medios idóneos esa situación.

Por el contrario, su defensa consistió en afirmar que si habían sido militantes de ese partido político, pero que los mismos habían causado baja, y por cuanto hace al ciudadano Juan Manuel Orozco Morales, dicho ciudadano, seguía registrado en su padrón de militantes, derivado de su actualización de datos del veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, sin embargo se abstuvo de exhibir documento alguno que acreditara que en efecto existió consentimiento de los ciudadanos en cuestión, tanto para el registro como para la actualización de datos referidos, con el argumento de haber sido destruida la documentación correspondiente, por el Registro Nacional de Militantes.

Ahora bien, tal y como quedó de manifiesto en el apartado del *MARCO NORMATIVO* de la presente Resolución, así como en el correspondiente a *CARGA Y ESTANDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO*, **la libertad de afiliación en materia político-electoral, es un derecho reconocido y así garantizado para todo ciudadano de nuestro país, al menos desde hace varias décadas, tanto a nivel constitucional como legal, el cual es concebido como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido político, permanecer afiliado a éste, desafiliarse e, incluso, no pertenecer a ninguno.** Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección de datos personales e información relacionada con la vida privada de las personas, es igualmente un derecho con una trayectoria de protección por demás lejana.

En este sentido, es pertinente dejar en claro que la garantía y protección a los citados derechos, evidentemente no deriva de disposiciones reglamentarias al interior de los institutos políticos, que prevean como obligación del partido político, la conservación de los expedientes de afiliación de cada miembro, ni tampoco a

partir de la emisión de los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, emitidos por el propio INE en la Resolución CG617/2012, sino que, como se vio, el derecho tutelado deviene de disposiciones de rango supremo, el cual debe ser tutelado en todo momento, y no a partir de normas internas o reglamentarias que así lo establezcan.

En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos políticos, en todas sus vertientes es un derecho de los ciudadanos previsto como garantía constitucional en nuestro País desde hace décadas, también lo es la obligación de los partidos políticos de preservar, y en su caso, de demostrar, en todo momento, que cualquier acto que engendre la voluntad de un ciudadano para formar parte en las filas de un instituto político, esté amparado en el o los documentos que demuestren indefectiblemente el acto previo del consentimiento, siendo **ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no se tiene o tenía el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes o que las mismas hayan sido destruidas por acuerdo emitido por su Comisión de Afiliación del Consejo Nacional del PAN.**

Lo anterior, porque, como se mencionó, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que, de manera insuperable, el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

En suma, toda vez que los denunciantes manifiestan no haber otorgado su consentimiento, que su afiliación se comprobó por la autoridad electoral competente, y que el *PAN*, no cumplió su carga para demostrar que la afiliación sí se solicitó voluntariamente; esta autoridad electoral considera que existe una vulneración al derecho de afiliación de los quejosos y que, intrínsecamente, para la configuración de esa falta utilizaron sin autorización sus datos personales, lo cual, debe ser considerado por esta autoridad para la imposición de la sanción que, en cada caso, amerite.

En este sentido, el estudio de fondo del presente asunto consistirá en determinar si en el caso en concreto, se violentó el derecho de libre afiliación de los quejosos.

Ahora bien, como ha quedado precisado el *PAN* reconoció que los hoy quejosos estuvieron registrados en su padrón de afiliados, de quienes la *DEPPP* los encontró registrados en el padrón del denunciado, con estatus de afiliación válida, como se muestra a continuación:

No.	Quejoso	Información <i>DEPPP</i>	Información <i>PAN</i>
1	Adriana Osuna Salazar	Afiliación válida	Fue afiliada pero causó baja
2	María Flor Felicitos Martínez	Afiliación válida	Fue afiliada pero causó baja

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AOS/CG/52/2017

No.	Quejoso	Información DEPPP	Información PAN
3	Gisel Vázquez Déciga	Afiliación válida	Fue afiliada pero causó baja
4	Juan Manuel Orozco Morales	Afiliación válida	Afiliado con estatus válido

No obstante lo anterior, en ningún caso aportó las cédulas correspondientes, a fin de acreditar ante esta autoridad que el registro de los mismos aconteció de forma libre, individual, voluntaria, personal y pacífica y que además para llevar a cabo ese trámite se cumplió con los requisitos establecidos para tal efecto en su normatividad interna.

En efecto, se considera que, en el caso, el medio de prueba esencial para acreditar la debida afiliación de esos ciudadanos **es la cédula de afiliación** o, en su caso, cualquier otra documentación establecida en la normatividad del PAN en materia de afiliación, en la que constara el deseo de los ciudadanos a afiliarse a ese partido político, al estar impresa de su puño y letra, el nombre, firma, domicilio y datos de identificación, circunstancia que no aconteció, tal y como se estableció en párrafos precedentes.

Al efecto, dicho denunciado manifestó que en sesión ordinaria de nueve de agosto de dos mil trece, la entonces Comisión de Vigilancia del Registro Nacional de Miembros de dicho partido político, emitió un acuerdo por el que se autorizó al Director del Registro procediera a la destrucción del papel que constituía archivo muerto de esa área, siendo ese el motivo por el cual no contaba con la documentación que avale que las afiliaciones denunciadas se llevaron a cabo de manera libre.

Sin embargo, tal argumento no lo exime de su responsabilidad, toda vez que el partido denunciado tiene la obligación de verificar, revisar y constatar fehacientemente que la o el ciudadano otorgó, de forma personal, libre y voluntaria, su intención de afiliarse a sus filas, a través de los respectivos documentos y formatos en los que conste y se pruebe ese hecho.

En consecuencia, también tiene el deber de **conservar y resguardar**, con el debido cuidado, la documentación soporte en la que conste la afiliación libre y voluntaria de sus militantes o afiliados, puesto que, se insiste, le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de

proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esto es así, porque los partidos políticos, son entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, por lo que están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar la documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

En conclusión, ante los hechos denunciados originalmente, esta autoridad electoral nacional requirió al *PAN* para que aclarara la imputación que se hizo en su contra, además de que se le emplazó por ese motivo y se le dio oportunidad para que, en vía de alegatos, manifestara lo que a su derecho conviniera, pero en ninguna de las etapas procesales realizó alegación que desvirtuara el agravio de los quejosos, ni ofreció o aportó prueba en descargo que resultara idónea o suficiente para eximirlo de responsabilidad.

Esto es, el *PAN* no demostró que la afiliación de los **cuatro ciudadanos** se realizó a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que dichos denunciados hayan dado su consentimiento libre para ser afiliados.

Y si bien, manifestó que los ciudadanos han sido desafiliados de dicho partido político por diversas razones, lo cierto es que no está en debate la cuestión de desafiliación o no de los ciudadanos y, en su caso, la petición que estos hubieran formulado, sino la acreditación por parte del *PAN*, de que fueron afiliados de manera libre, voluntaria e individual, circunstancia que el partido político denunciado no acreditó, faltando así a la carga procesal que el impone el artículo 15 párrafo segundo de la *LGSMI*, de aplicación supletoria en el presente caso.

En otro orden de ideas, los ciudadanos en su escrito inicial de queja, refirieron desconocer su afiliación al *PAN* en todo momento, es decir, que nunca manifestaron su voluntad de afiliarse a dicho partido político; asimismo, en la vista que se les concedió para formular alegatos, Juan Manuel Orozco Morales, reitero su desconocimiento de haberse afiliado a ese instituto político.

Por lo anterior, este órgano colegiado considera pertinente declarar **fundado** el presente procedimiento, pues se concluye que el señalado instituto político infringió las disposiciones electorales tendentes a demostrar la libre afiliación de los **cuatro ciudadanos** antes referidos, quienes aparecieron como afiliados a dicho instituto político, por no demostrar el acto volitivo de éstos para permanecer agremiados a ese partido.

En efecto, como se demostró anteriormente, los denunciantes que aparecieron afiliados al *PAN*, manifestaron que en momento alguno otorgaron su consentimiento para ello, siendo que dicho instituto político no demostró lo contrario, por lo que se actualiza la violación al derecho fundamental de libre afiliación garantizado desde la Constitución y la ley, según se expuso.

Al respecto, es importante destacar, en lo que interesa, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada el seis de junio de dos mil dieciocho, al resolver el medio de impugnación con clave SUP-RAP 141/2018:⁶³

“...si los ciudadanos referidos alegaron que no dieron su consentimiento para pertenecer al partido político recurrente, implícitamente sostienen que no existe la constancia de afiliación atinente; por tanto, los ciudadanos no estaban obligados a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba tampoco son objeto de demostración los hechos negativos, salvo que envuelvan una afirmación.”^{64”65}

⁶³ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0141-2018.pdf

⁶⁴ De conformidad con los numerales 461 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación el diverso 441 de ese ordenamiento y 15, segundo párrafo, de la Ley de Medios

⁶⁵ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0141-2018.pdf

Esto es, en el tema que nos ocupa, conforme a lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada en el medio de impugnación SUP-RAP 141/2018, la carga probatoria corresponde a los partidos políticos, en el caso al *PAN*, ente político que *se encuentra obligado a demostrar que la solicitud de ingreso al partido fue voluntaria, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad o, en su caso, también tenía la posibilidad de probar sus afirmaciones a través de otros medios de prueba como lo serían documentales que justificaran la participación voluntaria de dichas personas en la vida interna del partido y con carácter de militante, como lo serían, por ejemplo, documentales que evidenciaran el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas, el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras,*⁶⁶ circunstancia que, en el particular no aconteció.

Así pues, el **PAN**, en los cuatro casos analizados, no demostró que las afiliaciones se realizaron a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que dichos ciudadanos hayan dado su consentimiento para ser afiliados, ni mucho menos que hayan permitido o entregado datos personales para ese fin, los cuales se estiman necesarios para procesar las afiliaciones, dado que estos elementos se constituyen como insumos obligados para, en su momento, llevar a cabo una afiliación, de ahí que esto sea necesario e inescindible.

Con base en ello, ante la negativa de los denunciantes de haberse afiliado al *PAN*, correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de pruebas idóneas, que la afiliación se llevó a cabo a través de los mecanismos legales para ello, en donde constara fehacientemente la libre voluntad de los hoy promoventes, lo que no hizo, pues como en cada caso se detalló, las documentales aportadas resultan insuficientes para acreditar el ejercicio libre, personal y voluntario del derecho de afiliación a dicho instituto político.

Es decir, dicho instituto político debió demostrar, con documentación soporte o pruebas idóneas, que dichas afiliaciones se realizaron de forma libre o voluntaria, o

⁶⁶ Criterio sostenido en la sentencia dictada en el medio de impugnación SUP-RAP 141/2018.

bien, que la aparición del nombre y datos de los quejosos en su padrón de militantes, fue consecuencia de un error involuntario o de alguna circunstancia diversa, pero no lo hizo.

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación al *PAN* implica, además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que pudiera haber servido de base o justificación al partido político para afiliar a los ahora quejosos.

Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales, tiene íntima vinculación con la indebida afiliación de los hoy quejosos por los que se declara fundado el presente procedimiento, lo cual ya quedó debidamente acreditado y, como consecuencia de ello, merece la imposición de las sanciones que se determinarán en el apartado correspondiente.

Cabe referir que a similar conclusión arribó este Consejo General en la resolución INE/CG787/2016, de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y su acumulado UT/SCG/Q/PRD/JL/SIN/6/2016, derivado de una falta de la misma naturaleza a la que aquí se estudia, en donde se determinó que el uso de datos personales poseía un carácter intrínseco o elemento esencial para la configuración de una afiliación indebida.

Por tanto, al abstenerse de acreditar el consentimiento de los ciudadanos inconformes para solicitar y/o adquirir la militancia a dicho ente político, impide contar con certeza respecto a que la militancia fue voluntaria, máxime si se concatena dicha abstención con lo expresado por éstos al desconocer su registro o incorporación al propio partido político.

Esto es así, porque el bien jurídico que se persigue con la normativa, tanto legal como interna del instituto político, tiene como objetivo que los partidos cuenten con padrones de militantes de ciudadanos que libre y voluntariamente hayan decidido pertenecer a sus filas, lo cual se consigue, manteniendo sus registros regularizados

en todo tiempo, para cumplir con los fines y propósitos de su vida intrapartidaria, además que es su deber tomar las medidas de control necesarias para preservar el padrón en depuración y actualización constante.

Conforme a los razonamientos hasta aquí expuestos y de la valoración conjunta a los medios probatorios correspondientes a los hechos acreditados que esta autoridad efectuó, conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, se declara **fundado** el presente procedimiento en contra del *PAN*, por la indebida afiliación de los hoy quejosos Adriana Osuna Salazar, María Flor Felicitos Martínez, Gisel Vázquez Déciga y Juan Manuel Orozco Morales.

Cabe referir que similar criterio adoptó este máximo órgano de dirección, al dictar las resoluciones INE/CG787/2016 e INE/CG53/2017,⁶⁷ dentro de los procedimientos sancionadores ordinarios UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y UT/SCG/Q/PRD/JL/SIN/6/2016 acumulados, y UT/SCG/Q/MECG/JD06/CHIH/4/2016, respectivamente.

Es de destacar que la resolución INE/CG53/2017, fue confirmada por la *Sala Superior*, al resolver el recurso de apelación **SUP-RAP-107/2017**, donde se consideró que ***conforme a las reglas de carga de la prueba, el partido político denunciado debía justificar que la quejosa fue afiliada voluntariamente, de manera que la prueba idónea que podía aportar al procedimiento para demostrar su hipótesis de inocencia, era precisamente la constancia de afiliación de la ciudadana, sin que así lo hubiera hecho.***

Ahora bien, más allá de la determinación de responsabilidad al partido político y la consecuente imposición de sanción, esta autoridad debe tutelar el derecho fundamental de afiliación de los quejosos, es decir, estamos frente a la defensa de un derecho humano de naturaleza político-electoral, que en términos del artículo 1º de la Constitución Federal debe ser respetado, protegido y garantizado por todas las autoridades del Estado Mexicano.

⁶⁷ Aprobado en Sesión Extraordinaria del Consejo General celebrada el siete de marzo de dos mil diecisiete. Consultable en la liga de internet http://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-resoluciones/2017/03_Marzo/CGex201703-07/CGex201703-7-rp-2.1.pdf

En tal sentido, se tiene que la voluntad de los denunciantes es no pertenecer a este partido político, por lo que se debe vincular al *PAN* para que, en el supuesto que los quejosos continúen en su padrón de afiliados, **sin mayor trámite**, cancele el registro de cada uno de ellos como sus militantes, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentaron sus escritos de renuncia o sus respectivas denuncias y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, las pruebas que amparen el cumplimiento.

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017, de cinco de enero del año en curso, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el INE, que lo vincule con un instituto político en particular.

CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS SANCIONES.

Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de las faltas denunciadas, así como la responsabilidad del *PAN*, en los casos detallados en el considerando que antecede, procede ahora determinar la sanción correspondiente, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 355, párrafo 5 del *COFIPE*, cuyo contenido se reproduce en el diverso 458, párrafo 5, de la *LGIFE*, relativo a la gravedad de la responsabilidad en que se incurra; el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; y, en su caso, la reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.

En relación con ello, el *Tribunal Electoral* ha sostenido que para individualizar la sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se

deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción electoral.

1. Calificación de la falta

A) Tipo de infracción

Partido	Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
<i>PAN</i>	La infracción se cometió por una acción del partido político denunciado, que transgredió disposiciones de la <i>Constitución</i> y del <i>COFIPE</i> , en el momento de su comisión.	La conducta fue la afiliación indebida y el uso no autorizado de los datos personales de una ciudadana.	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; y 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e) del <i>COFIPE</i> ; disposiciones que se encuentran replicadas en los diversos dispositivos 443, párrafo 1, incisos a) y n); de la <i>LGIFE</i> , y 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la <i>LGPP</i> .

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o prohibidas.

En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el caso concreto, se acreditó que el *PAN* incluyó indebidamente en su padrón de afiliados, a **cuatro** ciudadanos respecto de los que se determinó previamente la indebida afiliación y utilización de datos personales, en razón de que el citado instituto político no demostró que para incorporarlos medió la voluntad de éstos de inscribirse como sus militantes, violentando con ello la norma electoral, en

específico las disposiciones precisadas en el recuadro inserto en el subapartado previo.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de los ciudadanos mexicanos, de optar libremente por ser o no militante de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, efectivamente consintieron libremente en ser sus agremiados.

Por otra parte, como se analizó, para la indebida afiliación acreditada en el expediente que se resuelve se usaron los datos personales de los promoventes sin que éstos hubiesen otorgado su consentimiento para ello, lo cual, constituye un elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida.

En efecto, si bien es cierto, a partir de las constancias que obran en autos no está demostrado que los datos personales hubieran sido utilizados con un propósito diverso a la afiliación indebida en sí misma, o bien su difusión frente a terceros, lo es también que dicha información fue necesaria para materializar la incorporación de los datos de los actores al padrón de militantes del partido político denunciado. Lo anterior, es acorde con lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto al tema de uso de datos personales, en el SUP-RAP-141/2018, en la que textualmente consideró lo siguiente:

“...los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de un ciudadano pertenecer a un partido político, no puede alegar que existe uso indebido de sus datos personales porque se consideran públicos.

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban pertenecer...”

De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción correspondiente al partido político involucrado.

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que el *PAN* transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la normativa interna del propio instituto político, y que, tal infracción se cometió en detrimento de los derechos de más de un ciudadano, esta situación no conlleva estar en presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de afiliación al *PAN*, el cual incluyó en su padrón de militantes a los quejosos respecto de los que se acreditó la conducta analizada, sin demostrar el consentimiento previo para ello.

D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

- a) Modo.** En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles al *PAN* consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la *Constitución*; así como 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIFE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *LGPP*, al incluir en su padrón de afiliados a **cuatro** ciudadanos, sin tener la documentación soporte que acredite fehacientemente la voluntad de éstos de pertenecer a las filas de dicho instituto político.
- b) Tiempo.** En el caso concreto, las afiliaciones indebidas acontecieron en diversos momentos, como se detalla en la tabla siguiente:

No	Ciudadano	Fecha de afiliación
1	Adriana Osuna Salazar	23 de noviembre de 2013
2	María Flor Felicitos Martínez	6 de diciembre de 2013
3	Gisel Vázquez Déciga	19 de mayo de 2004
4	Juan Manuel Orozco Morales	28 de diciembre de 2013

- c) **Lugar.** Con base en las razones plasmadas en los escritos de denuncias, se deduce que las faltas atribuidas a los partidos políticos se cometieron de la siguiente manera:

No.	Nombre	Entidad
1	Adriana Osuna Salazar	Sinaloa
2	María Flor Felicitos Martínez	Ciudad de México
3	Gisel Vázquez Déciga	Ciudad de México
4	Juan Manuel Orozco Morales	Michoacán

E) Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Se considera que en el caso existe una conducta **dolosa** por parte del *PAN*, en violación a lo previsto en los artículos ya establecidos en los párrafos anteriores.

La falta se califica como **dolosa**, por lo siguiente:

- El *PAN* es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus de **entidad de interés público**, de conformidad con el artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Federal; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- El *PAN*, como cualquier otro partido está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos

de los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 38, párrafo 1, inciso a), del *COFIPE*.

- El de libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.
- Todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.
- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución Federal; 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e) del *COFIPE*.
- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una

controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria.**

- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, es una violación de orden constitucional y legal que **requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento.**

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta se considera dolosa, porque:

- 1) Los quejosos aducen que no solicitaron en momento alguno su registro o incorporación como militantes al partido hoy denunciado.
- 2) Quedó acreditado que los quejosos aparecieron en el padrón de militantes del *PAN*, con estatus válido, conforme a lo informado por la *DEPPP*.
- 3) El partido político denunciado no demostró que las afiliaciones de los quejosos se hubieran realizado a través de los mecanismos legales y partidarios conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y voluntaria de los denunciados.
- 4) El *PAN* no demostró ni probó que la afiliación de los **hoy quejosos**, fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos

razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun indiciaria, para estimar que la afiliación de los quejosos fue debida y apegada a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.

F) Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el *PAN*, se cometió al afiliar indebidamente a **cuatro** ciudadanos, sin demostrar el acto volitivo de éstos tanto de inscribirse en su padrón de militantes como de haber proporcionado sus datos personales para ese fin.

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en garantizar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, mediante la conservación de los documentos atinentes que permitan demostrar el acto de voluntad de los ciudadanos quejosos de militar en ese partido político.

2. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A. Reincidencia

Por cuanto a la **reincidencia** en que pudo haber incurrido el partido materia de esta Resolución, este organismo electoral autónomo considera que **no se actualiza**.

De conformidad con el artículo 355 párrafo 6 del *COFIPE*, cuyo contenido reproduce el diverso 458, párrafo 6 de la *LGIPE*, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el mencionado *Código*, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, la *Sala Superior* ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);
2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
3. Que en ejercicios anteriores el infractor **haya sido sancionado por esa infracción mediante Resolución o sentencia firme.**

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por la Sala Superior, a través de la Jurisprudencia 41/2010, cuyo rubro es: ***REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.***⁶⁸

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con anterioridad.

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta.

En este sentido, debe precisarse que, en el presente asunto, no puede considerarse actualizado dicho supuesto por cuanto hace al *PAN*, pues en los archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya sancionado a ese ente político por faltas como la que se sanciona por esta vía, que se hayan dictado con anterioridad a los hechos materia de las presentes denuncias.

B. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

⁶⁸ De observancia obligatoria, en términos del artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, pues se comprobó que el *PAN* afilió a los *quejosos*, sin demostrar contar con la documentación que acredite que medió la voluntad de tales ciudadanos de pertenecer o estar inscritos a dicho instituto político.
- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, de optar por ser o no militante de algún partido político, y la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.
- Para materializar la indebida afiliación de los denunciados, se utilizaron indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para formar los padrones de afiliados del partido político denunciado.
- No existió un beneficio por parte del *PAN*, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.

- No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral.
- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso Electoral.
- No existe reincidencia por parte del *PAN*.

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente **calificar la falta** en que incurrió el partido político como de **gravedad ordinaria**, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el *PAN*, dolosamente, infringió el derecho de libre afiliación de los hoy quejosos, lo que constituye violación a un derecho fundamental de los ciudadanos, reconocido en la *Constitución*.

C. Sanción a imponer

Ahora bien, la mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción.

Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor cuantía⁶⁹.

El artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIFE*, dispone el catálogo de sanciones a imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular,

⁶⁹ Véase la tesis XXVIII/2003 de la Sala Superior, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.

siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México; reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita; y en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la *Constitución* y de la *LGIPE*, con la cancelación de su registro como partido político.

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción (especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción acreditada), así como la conducta realizada por el *PAN en el caso concreto*, se determina que debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida.

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la *LGIPE*, confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realicen una falta similar.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que ni el *COFIPE* ni la *LGIPE* determinan pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha

potestad; por el contrario, solo establece las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

Asimismo, es importante tomar en cuenta el número de ciudadanos afiliados indebidamente al *PAN* fue únicamente de cuatro.

Con base en lo anterior, este *Consejo General* estima que, derivado de las circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida al partido político denunciado, justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGIPE*, consistente en una **MULTA unitaria por cuanto hace a cada uno de los cuatro ciudadanos sobre quienes se cometió la falta acreditada**, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto.

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la sanción a imponer.

En este orden de ideas, es pertinente hacer notar, que ha sido criterio de esta autoridad, al resolver los procedimientos UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y su acumulado, y UT/SCG/Q/MECG/JD06/CHIH/4/2016, el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis y siete de marzo de dos mil diecisiete, respectivamente —y que

fue reiterado en el diverso SCG/Q/FSG/CG/33/INE/80/2014 Y SU ACUMULADO SCG/Q/JAEB/JL/CHIH/37/INE/84/2014, resuelto por este órgano máximo de dirección el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, bajo la clave INE/CG401/2017—, en los que se sancionó por una indebida afiliación de un ciudadano, en cada caso, con una multa equivalente a 642 (seiscientos cuarenta y dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento de la comisión de la conducta, sanción que se estima debe tomarse como base para el presente asunto, si se considera que en dichos asuntos se demostró la comisión de una infracción similar a la que acontece en los casos que aquí se resuelven.

En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta causa, en específico **que no se refiere a la interposición de una sola queja** —a diferencia de lo que aconteció en los precedentes citados—, **sino de varias quejas y afiliaciones indebidas, las cuales han quedado acreditadas en autos**, es claro que la individualización de la sanción aplicada con motivo de la afiliación indebida de los ciudadanos al partido político denunciado, debe resultar proporcional al número de ciudadanos en cuyo perjuicio se cometió la falta, sin perder de vista las condiciones socioeconómicas del instituto político, y no simplemente, los hechos denunciados y acreditados en el presente procedimiento, a fin de que la sanción que se imponga resulte efectivamente proporcional sin ser excesiva.

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad debe determinar su monto o cuantía, **tomando en cuenta** las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar de forma individual la multa que corresponda.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión que tiene sustento en la tesis relevante XXVIII/2003,⁷⁰ emitida por la Sala Superior, misma que a letra dice:

SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.- *En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.*

Ahora bien, a juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con base en lo dispuesto en la fracción II del numeral citado, lo procedente es imponer sendas **multas** equivalentes a **seiscientos cuarenta y dos** días de salario mínimo general para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) al **PAN**, **por cada uno de los cuatro ciudadanos que se acreditó fueron afiliados indebidamente.**

En virtud de que los ciudadanos denunciantes fueron afiliados en diferentes momentos, a fin de adoptar la postura más favorable para los partidos políticos y reducir a la mínima expresión posible el carácter represor con que actúa el Estado en los procedimientos de tipo sancionador, es que, para el cálculo de la multa correspondiente, se debe tomar en cuenta el salario mínimo vigente al momento de realizar la afiliación y, obtenido el monto correspondiente, deberá hacerse la conversión a Unidades de Medida y Actualización.

⁷⁰ Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 7, Año 2004, página 57

Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia **10/2018**, emitida por el Tribunal Electoral, de rubro **MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN**.⁷¹

Al respecto, es un hecho notorio que se invoca en términos de lo establecido en el artículo 358 del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 461 de la *LGIPE*, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fija anualmente los montos respectivos, mismos que al ser relacionados con las fechas de afiliación, para obtener la sanción que corresponde por cuanto a cada uno de los ciudadanos indebidamente afiliados, arrojan lo siguiente:

CIUDADANOS QUE FUERON AFILIADOS INDEBIDAMENTE		
Total de quejosos	Salario mínimo	Sanción a imponer
Afiliación en 2004		
1	\$45.24	\$29,044.08
Afiliación en 2013		
3	\$64.76	\$124,727.76
TOTAL		\$153,771.84
[Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].		

Ahora bien, es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la *Constitución* —efectuada por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones.

En esas condiciones, lo procedente es transformar la sanción que se considera idónea, construida a partir de la referencia legal de salarios mínimos, a Unidades de Medida y Actualización, para lo cual es necesario dividir el monto base establecido (la suma de multiplicar seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México por el salario mínimo vigente en cada año

⁷¹ Consultable en la liga electrónica <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=UNIDAD,DE,MEDIDA,DE,ACTUALIZACI%C3%93N>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AOS/CG/52/2017

correspondiente a la afiliación), entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, misma que equivale, para el ejercicio fiscal en curso, a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M. N.).

En consecuencia, al *PAN* se habrá de aplicar una sanción por cada uno de los ciudadanos, como se precisa enseguida:

Sanción por ciudadano:

No	Ciudadano	Fecha de afiliación	Multa impuesta en SMGV	Valor SMGV	Valor UMA vigente	Sanción en UMAS (A*B)/C ⁷²	SANCIÓN A IMPONER (C*D) ⁷³
			A	B	C	D	
1	Adriana Osuna Salazar	30/01/2013	642	\$64.76	\$80.60	515.83	\$41,575.92
2	María Flor Felicitos Martínez	13/04/2013	642	\$64.76	\$80.60	515.83	\$41,575.92
3	Juan Manuel Orozco Morales	13/04/2013	642	\$64.76	\$80.60	515.83	\$41,575.92
4	Gisel Vázquez Déciga	19/05/2004	642	\$45.24	\$80.60	360.34	\$29,044.08
TOTAL				\$153,771.84			

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, pues sin ser gravosa, sí puede inhibir al *PAN* para que en el futuro vigile el cumplimiento de las normas de la materia.

Debe precisarse que se considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, ya que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, se concluye que la misma resulta eficaz y proporcional.

D. EL MONTO DEL BENEFICIO, LUCRO, DAÑO O PERJUICIO ECONÓMICO DERIVADO DE LA INFRACCIÓN

Se estima que la infracción cometida por parte del *PAN*, aun cuando causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de la infracción.

⁷² Cifra al segundo decimal

⁷³ *Idem*

E. Las condiciones socioeconómicas del infractor

Sobre este punto, es preciso señalar que conforme al Acuerdo INE/CG339/2017, emitido por este *Consejo General* el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se estableció que, entre otros, el *PAN* recibiría mensualmente en el presente ejercicio, por concepto de financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes, la siguiente cantidad:

SUJETO	Monto del financiamiento público para el sostenimiento de Actividades Ordinarias del mes de septiembre 2018
PAN	\$68'993,261.00

Ahora bien, según fue informado por la *DEPPP*, a través del oficio **INE/DEPPP/DE/DPPF/5693/2018**, el monto de la ministración mensual correspondiente a septiembre de dos mil dieciocho, debía ser ajustado en función de las sanciones administrativas pendientes de cubrir por dicho instituto político nacional, por lo cual la cifra total a recibir sería la siguiente:

SUJETO	IMPORTE DE LA MINISTRACIÓN DE SEPTIEMBRE DE 2018	IMPORTE TOTAL DE MULTAS Y SANCIONES SEPTIEMBRE 2018	IMPORTE NETO DE LA MINISTRACIÓN
PAN	\$68'993,261.00	\$180,672.00	\$68,812,589.00

F. Impacto en las actividades del sujeto infractor

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta al *PAN*, no es de carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida, respecto al monto del financiamiento que recibirá por concepto de actividades ordinarias permanentes en el mes de septiembre del año en curso, son los siguientes porcentajes:

Partido político	Año	Monto de la sanción por ciudadano.⁷⁴	Ciudadanos indebidamente afiliados	% de la ministración mensual por ciudadano
<i>PAN</i>	2004	\$29,044.08	1	0.042%
	2013	\$41,575.92	3	0.060%

⁷⁴ Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.

Por consiguiente, la sanción impuesta al *PAN* no es de carácter gravoso, si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual correspondiente al mes de septiembre de este año.

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción cometida por el *PAN* (especialmente los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con el financiamiento que recibe del *INE* para el mes de septiembre de dos mil dieciocho, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político sancionado.

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el partido político de mérito —tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagar sin que ello afecte sus operaciones ordinarias, además de que las sanciones son proporcionales a las faltas cometidas y se estima que, sin resultar excesivas ni ruinosas, pueden generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la *Sala Superior* en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-250/2009⁷⁵, es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

QUINTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE LOS QUEJOSOS COMO MILITANTES.

En tal sentido, se tiene que la voluntad de los denunciantes es no pertenecer al *PAN*, por lo que se debe vincular al partido político, para que, de ser el caso, en el supuesto que los quejosos continúen en su padrón de militantes, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentaron sus escritos de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, los medios de prueba que amparen el cumplimiento.

⁷⁵ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AOS/CG/52/2017

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017,⁷⁶ de cinco de enero de dos mil diecisiete, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el *INE*, que lo vincule con un instituto político en particular.

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la Constitución Federal,⁷⁷ se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación así como por juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, previsto en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la *Ley de Medios*.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara **fundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra del *PAN*, por los hoy quejosos a **Adriana Osuna Salazar, María Flor Felicitos Martínez, Gisel Vázquez Déciga y Juan Manuel Orozco Morales** en términos del Considerando **TERCERO** de esta Resolución.

SEGUNDO. En términos del Considerando **CUARTO** de la presente Resolución, se impone al *PAN*, **una multa en los términos que enseguida se precisan, respecto de cada uno de los ciudadanos de los que se acreditó la falta ya señalada:**

No	Ciudadano	Importe de la Multa
1	Adriana Osuna Salazar	515.83 (quinientos quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$41,575.92 (cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 92/100 M.N.) [ciudadana afiliada en 2013]

⁷⁶ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/JDC/2/SUP_2017_JDC_2-626321.pdf

⁷⁷ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª), Página: 2864, Rubro: “**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.**”

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AOS/CG/52/2017

No	Ciudadano	Importe de la Multa
2	María Flor Felicitos Martínez	515.83 (quinientos quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$41,575.92 (cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 92/100 M.N.) [ciudadana afiliada en 2013]
3	Gisel Vázquez Déciga	360.34 (trescientos sesenta punto treinta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$29,044.08 (veintinueve mil cuarenta y cuatro pesos 08/100 M.N.) [ciudadana afiliada en 2004]
4	Juan Manuel Orozco Morales	515.83 (quinientos quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$41,575.92 (cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 92/100 M.N.) [ciudadano afiliado en 2013]

TERCERO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7 de la LGIPE, el monto de las multas impuestas al **PAN**, será deducido, según corresponda, de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su Considerando CUARTO.

CUARTO. Se vincula al **PAN** para que, de ser el caso, en el supuesto que las quejas continúen en su padrón de militantes, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentaron sus escritos de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la **DEPPP**, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, los medios de prueba que amparen el cumplimiento, conforme a lo dispuesto en su Considerando QUINTO.

QUINTO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SEXTO. **Notifíquese personalmente**, a Adriana Osuna Salazar, María Flor Felicitos Martínez, Gisel Vázquez Déciga y Juan Manuel Orozco Morales; **por oficio** al **PAN**, por conducto de su representante ante este Consejo General; y por **estrados** a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1241/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ORDINARIO
EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/SSN/CG/57/2017
DENUNCIANTE: SIXTOS SALAMANCA
NÚÑEZ Y OTROS
DENUNCIADO: PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/SSN/CG/57/2017 INSTAURADO CON MOTIVO DE LAS QUEJAS PRESENTADAS POR SERGIO LOAIZA GÓMEZ, GLORIA DEL CARMEN TANORI FERRALES Y MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ ESTRADA EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, POR LA SUPUESTA AFILIACIÓN INDEBIDA Y LA UTILIZACIÓN DE DATOS PERSONALES PRESUNTAMENTE SIN SU CONSENTIMIENTO

Ciudad de México, 12 de septiembre de dos mil dieciocho.

G L O S A R I O

Comisión:	La Comisión de Quejas y Denuncias del INE
Consejo General:	Consejo General del INE
COFIPE o Código:	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/SSN/CG/57/2017

<i>Constitución:</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<i>DEPPP:</i>	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE
<i>DERFE:</i>	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE
<i>IFE:</i>	El otrora Instituto Federal Electoral
<i>Instituto o INE:</i>	Instituto Nacional Electoral
<i>Ley de Medios:</i>	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
<i>Ley de Partidos:</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>LGIPE:</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>PVEM:</i>	Partido Verde Ecologista de México
<i>Quejosos o denunciantes:</i>	Sergio Loaiza Gómez, Gloria del Carmen Tanori Ferrales y Miguel Ángel Hernández Estrada.
<i>Reglamento de Quejas:</i>	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>Sala Superior:</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>UTCE:</i>	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del <i>INE</i>

R E S U L T A N D O

I. PRESENTACIÓN DE LAS QUEJAS. Mediante oficios remitidos por las Juntas Distritales Ejecutivas de este Instituto 06 en Sinaloa (treinta de octubre de dos mil diecisiete); 03 en Sonora (dieciséis de diciembre de dos mil diecisiete), y 02 en Chiapas (veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete), hicieron llegar las quejas presentadas por Sergio Loaiza Gómez, Gloria del Carmen Tanori Ferrales y Miguel Ángel Hernández Estrada, respectivamente, en las que manifestaron que supuestamente fueron afiliados de manera indebida al padrón de militantes del *PVEM*, y que para ello, presuntamente se utilizaron ilegalmente sus datos personales.

II. REGISTRO, ADMISIÓN Y RESERVA DE EMPLAZAMIENTO. El cuatro de diciembre de dos mil diecisiete,¹ el Titular de la *UTCE* instruyó la integración del expediente en que se actúa, el cual quedó registrado con la clave **UT/SCG/Q/SSN/CG/57/2017**, como un procedimiento sancionador ordinario por la presunta indebida afiliación y el uso indebido de datos personales para ese fin.

En el acuerdo en cita, se admitió a trámite el procedimiento de sanción señalado con anterioridad respecto a Sergio Loaiza Gómez; posteriormente, en acuerdo de veintiséis de diciembre del mismo año, se admitieron a trámite las quejas presentadas por Gloria del Carmen Tanori Ferrales y Miguel Ángel Hernández Estrada.

En tales acuerdos se ordenaron diligencias de investigación, consistentes en solicitar a la *DEPPP* informara si los quejosos se encontraban dentro del padrón de afiliados del *PVEM* y, de ser el caso, proporcionara la fecha de tal afiliación; asimismo, se le requirió al citado instituto político para que informara si los referidos ciudadanos aparecían en su padrón de afiliados y, de ser el caso, remitiera original o copia certificada de las constancias en las que constara el consentimiento de los denunciantes respecto de la afiliación materia de controversia.

¹ Visible a fojas 4 a 11.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/SSN/CG/57/2017

III. EMPLAZAMIENTO. El dos de marzo del año en curso,² se ordenó el emplazamiento al *PVEM*, para efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la conducta que se le imputó y aportara las pruebas que considerara pertinentes.

Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito.

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

EMPLAZAMIENTO				
CONSTANCIA CON LA CUAL SE MATERIALIZÓ LA DILIGENCIA	SUJETO EMPLAZADO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE CONTESTACIÓN AL EMPLAZAMIENTO	PRUEBAS OFRECIDAS
INE-UT/2171/2018 ³	PVEM	Siete de marzo de dos mil dieciocho	Catorce de marzo de dos mil dieciocho	El partido político denunciado manifestó que no existe uso indebido de los datos personales de los quejosos y que no existe una afiliación indebida de los denunciantes al PVEM, pues estos se afiliaron voluntariamente. Ofreció diversas pruebas documentales privadas consistentes en copia simple de formato de afiliación de Sergio Loaiza Gómez, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana.

IV. VISTA A LA CIUDADANA GLORIA DEL CARMEN TANORI FERRALES. Toda vez que el *PVEM* aportó constancia original del formato de afiliación de Gloria Del Carmen Tanori Ferrales, mediante Acuerdo de treinta de abril de dos mil dieciocho, se ordenó poner a la Vista de tal ciudadana la referida documental, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera.⁴

V. ESCISIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR CUANTO HACE A SIXTOS SALAMANCA NÚÑEZ. En razón de que el *PVEM* aportó una constancia

² Acuerdo visible a fojas 167 del expediente.

³ Visible a fojas 181 a 185.

⁴ Acuerdo de Vista en folios *** a ***; constancias de notificación de *** a ***; no hubo respuesta.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/SSN/CG/57/2017

relacionada con la presunta indebida afiliación de Sixtos Salamanca Núñez, se realizaron diligencias que culminaron con la emisión, el doce de junio del año en curso, de un acuerdo⁵ en el que se ordenó escindir el presente procedimiento por cuanto hace al ciudadano ya precisado, para continuar su tramitación en el expediente UT/SCG/Q/JGRS/CG/130/2018; por tal motivo, como se refirió previamente, se excluye a tal sujeto de la presente determinación.

VI. ALEGATOS Y VISTA CON CONSTANCAS A SERGIO LOAIZA GÓMEZ. El veinticinco de junio de dos mil dieciocho,⁶ se ordenó dar vista a las partes, a efecto de que en vía de alegatos manifestaran lo que a su derecho conviniera.

El acuerdo de vista para alegatos, se diligenció en los siguientes términos:

CONSTANCIA CON LA CUAL SE MATERIALIZÓ LA DILIGENCIA	SUJETO NOTIFICADO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE CONTESTACIÓN
INE-UT/10287/2018 ⁷	PVEM	26 de junio de 2018	2 de julio de 2018
INE/SIN/JDE01/VS/0697/2018	Sergio Loaiza Gómez	12 de julio de 2018	No contestó
INE/03JDE-SON/1168/2018	Gloria del Carmen Tanori Ferrales	16 de julio de 2018	No contestó
INE/JDE02/VS/371/2018	Miguel Ángel Hernández Estrada	12 de julio de 2018	No contestó

Cabe precisar que, en ese mismo acuerdo, se ordenó poner a la vista de Sergio Loaiza Gómez, la copia simple del formato de afiliación del señalado ciudadano aportado por el partido político denunciado, sin que el quejoso se pronunciara al respecto.

VII. ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, toda vez que no había diligencias pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la *Comisión*.

⁵ Constancia ubicada en fojas 242 a 245

⁶ Visible a fojas 282.

⁷ Visible a fojas 287 del expediente.

VIII. SESIÓN DE LA COMISIÓN. En la Octogésima Cuarta sesión extraordinaria urgente de carácter privado, celebrada el seis de septiembre de dos mil dieciocho, la *Comisión* resolvió el presente Proyecto de Resolución por unanimidad de votos de sus integrantes presentes, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *Ley de Partidos*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte del *PVEM*, en perjuicio de los ciudadanos que han sido señalados a lo largo de la presente determinación.

Ahora bien, de conformidad con los artículos 442, párrafo 1, inciso a); 443, párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE* y en el artículo 25 de la *Ley de Partidos*, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dichas leyes.

En consecuencia, siendo atribución del máximo órgano de dirección del INE conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, esta autoridad resulta competente para conocer y resolver respecto de la presunta infracción denunciada, atribuida al *PVEM*, derivada esencialmente, de la violación al derecho de libertad afiliación y utilización indebida de datos personales.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,⁸ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de militantes.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGPE*, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, segundo párrafo, de la *Constitución*, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO

La legislación comicial sustantiva y procedimental que será aplicable en el presente asunto, será la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; en virtud de que las presuntas infracciones fueron cometidas en el año dos mil dieciséis,

⁸ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

fecha posterior a la entrada en vigor de la mencionada ley; y el Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral.

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO

1. LITIS

En el presente asunto se debe determinar si el *PVEM* afilió indebidamente o no a los ciudadanos que alegan no haber dado su consentimiento para estar en sus filas, haciendo para ello uso ilegítimo de su información personal, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *Ley de Partidos*.

2. MARCO NORMATIVO

A) Constitución, tratados internacionales y ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: ...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

...

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la *Constitución Federal*, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de

asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de

la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 24/2002 emitida por la *Sala Superior*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES.**

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,⁹ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

⁹ Consultable en la página https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes —asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación

política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

Artículo 23. Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:

I...

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete,

mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;
- Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
- Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGIFE*, que es obligación de

los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* del *IFE* por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *H. Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su constitución y registro.

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.
- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los

afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.

- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre

afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y de la *LGIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna del PVEM

A efecto de tener claridad acerca del proceso que un ciudadano debe llevar a cabo para convertirse en militante del partido político ahora denunciado, se hace necesario analizar la norma interna del partido político, para lo cual, enseguida se transcribe la parte conducente de los Estatutos del PVEM:¹⁰

De los Procedimientos para Afiliación de sus Militantes, Adherentes y de sus Simpatizantes

Artículo 2.- *El Partido Verde Ecologista de México, está abierto para todos los mexicanos que se interesen, respeten y acepten la Declaración de Principios, el Programa de Acción, y los Estatutos del Partido, que colaboren en la defensa y protección del medio ambiente y coincidan con el principio básico de la democracia en el respeto de la decisión de la mayoría.*

Los mexicanos que así lo decidan podrán afiliarse libre e individualmente al instituto político de conformidad con las siguientes modalidades:

I.- Militante, ciudadanos que se valoran como el principal activo del Partido Verde Ecologista de México; con el compromiso y la participación en la toma de decisiones, que contribuyen a definir el proyecto verde ecologista mexicano;

II.- Adherente, los mexicanos que contribuyen con el Partido Verde Ecologista de México para la realización de sus fines y objetivos mediante aportaciones intelectuales y de propaganda; y

III.- Simpatizante, los mexicanos que mantienen una voluntad activa de colaboración y se inscriben voluntariamente en un registro del correspondiente ámbito territorial; para recibir información de actividades, reuniones y participación en programas.

La afiliación al Partido Verde Ecologista de México, es individual, personal, intransferible, libre y pacífica. En tal virtud y por tratarse de un Partido Político Nacional, en el cual sus afiliados; militantes, simpatizantes y adherentes participan en forma personal y voluntaria, en el ejercicio de las actividades políticas que se encuentran consideradas en el Artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como prerrogativas de los ciudadanos, la simple afiliación a este Instituto Político de ninguna manera podrá generar derechos laborales.

¹⁰ Consultados en el enlace electrónico <https://actores-politicos.ine.mx/docs/actores-politicos/partidos-politicos/nacionales/documentos-basicos/historico-documentos/PVEM13022004EST.pdf> el veintiuno de junio de dos mil dieciocho.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/SSN/CG/57/2017

Artículo 3.- *Para ser militante del Partido Verde Ecologista de México, es necesario ser ciudadano mexicano con el compromiso de lograr una sociedad más justa, solidaria e igualitaria, a través de la participación de las ideas y del trabajo, que definan y configuren el proyecto político verde ecologista mexicano de transformación y búsqueda de una sociedad mejor y de una sana relación del hombre con su entorno natural.*

Los militantes del Partido Verde Ecologista de México son aquellos ciudadanos que están en pleno ejercicio de sus derechos políticos y estatutarios y acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

I.- Estar registrado en el padrón de adherentes por un plazo no menor a dos años plenamente acreditados conforme al capítulo de afiliación de los presentes Estatutos. En los casos de haber sido dirigente, candidato o haber ocupado un cargo de elección popular postulado por otro instituto político, el plazo a cumplir no podrá ser inferior a por lo menos tres años a partir de su registro como adherente;

II.- Adquirir el compromiso de participar en forma permanente y disciplinada en la realización de los objetivos del Partido;

III.- Una vez cumplidos los requisitos anteriores y apoyado por un militante, solicitar por escrito su cambio de carácter al Comité Ejecutivo Estatal correspondiente, quien turnará dicha solicitud al Consejo Político Nacional para su aprobación, quien en su caso registrará su inclusión en el padrón nacional de militantes.

...

Artículo 4.- *Son adherentes del Partido los mexicanos que hayan solicitado personal, libre e individualmente al Comité Ejecutivo Estatal de su ámbito territorial su adhesión al padrón Estatal de adherentes en los términos de los presentes Estatutos y que se comprometan a contribuir a la realización de los objetivos del Partido, mediante aportaciones intelectuales o con su apoyo de opinión y de propaganda.*

El Consejo Político Nacional se reunirá, por lo menos una vez cada tres meses o cuando las necesidades así lo indiquen, con el objeto de pronunciarse sobre la admisión o no de ciudadanos que durante ese lapso hayan solicitado su cambio de calidad de afiliado, de adherente a militante y, en su caso, expedir el nombramiento y la credencial correspondiente del solicitante o, en su defecto, emitir el Acuerdo que niegue tal calidad, en el que se establecerán la razones y fundamentos que motivan la negativa de registro.

Para conservar el carácter de adherente se requerirá cumplir los presentes Estatutos, las normas que de éste emanen y difundir los Documentos Básicos del Partido.

...

CAPÍTULO III

De los Militantes y Adherentes

Artículo 7.- Son derechos y obligaciones de los militantes del Partido Verde Ecologista de México, los consignados en las siguientes bases:

...

Segunda.- Serán obligaciones y deberes de los militantes:

...

III.- Conservar y mantener vigente su constancia de militante del Partido Verde Ecologista de México;

...

IX.- Cubrir sus cuotas puntualmente al Partido Verde Ecologista de México conforme al Capítulo de Afiliación de los presentes Estatutos;

...

XIII.- De conformidad con lo previsto por la fracción III, que antecede, todos los militantes deberán ratificar su militancia en el proceso que para tal efecto podrá convocar en todo el país el Consejo Político Nacional previo a la celebración de procedimientos internos, debiendo recibir una nueva credencial que acredite su calidad de militante.

...

Artículo 8.- Son derechos y obligaciones de los adherentes del Partido Verde Ecologista de México, los consignados en las siguientes bases:

Primera.- Serán derechos y prerrogativas de los adherentes:

...

VIII.- Solicitar ante la instancia estatutaria correspondiente el cambio de calidad de adherente por el de militante conforme a lo señalado por los presentes Estatutos; y

...

Segunda.- Serán obligaciones y deberes de los adherentes:

...

III.- Conservar y mantener vigente su constancia de adherente del Partido Verde Ecologista de México;

...

El Consejo Político Nacional custodiará, administrará y actualizará una vez al año todo lo relacionado con el Padrón Nacional de Adherentes.

Artículo 9.- Causará baja como militante o adherente del Partido, cuando:

...

V.- Sea postulado por otro Partido político a cualquier cargo de elección popular;

VI.- Cuando no ratifique su militancia en el proceso estatutario que para tal efecto convoque el Consejo Político Nacional;

...

De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente:

- Los mexicanos que así lo decidan, pueden afiliarse al *PVEM* de conformidad con las siguientes modalidades: militante, adherente, y simpatizante.
- La afiliación al *PVEM* es individual, personal, intransferible, libre y pacífica.
- Para ser militante se requiere estar registrado en el padrón de adherentes por un plazo no menor a dos años plenamente acreditados. Para cambiar de calidad, se debe solicitar por escrito el cambio de carácter al Comité Ejecutivo Estatal correspondiente, quien turnará dicha solicitud al Consejo Político Nacional para su aprobación.
- Son adherentes del *PVEM*, los mexicanos que hayan solicitado personal, libre e individualmente al Comité Ejecutivo Estatal correspondiente, su adhesión al padrón estatal de adherentes.
- El Consejo Político Nacional, en caso de aprobación de cambio de calidad de afiliado, expedirá nombramiento y credencial del solicitante.
- Son obligaciones de los militantes, entre otras, cubrir sus cuotas al partido y ratificar su militancia en el proceso correspondiente, debiendo recibir una nueva credencial que acredite su calidad de militante.
- Es obligación de los adherentes, entre otras, conservar y mantener vigente su constancia de adherente al partido.
- Es causal de baja como militante o adherente, no ratificar la militancia en el proceso estatutario correspondiente.

Aunado a lo anterior, en el escrito con que el *PVEM* dio respuesta al emplazamiento formulado por esta autoridad mediante Acuerdo de dos de marzo del año en curso, dicho partido manifestó que el procedimiento para afiliar a ciudadanos es el siguiente:

- Acudir a cualquier oficina del *PVEM* más cercana.
- Presentar escrito en donde se exprese el deseo de afiliarse al *PVEM*, acompañando a dicho escrito fotocopia de credencial para votar.

D) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

3. CARGA Y ESTANDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante del *PVEM*, por regla general debe acudir a las instancias partidistas competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso en particular el *PVEM*), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25, párrafo 1, inciso c), de la *Ley de Partidos*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la Constitución, tratados y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y voluntaria.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad

nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.

- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la Sala Superior, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**,¹¹ donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Jurisprudencia 21/2013, de rubro: **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,¹² el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria¹³ y como estándar probatorio¹⁴.

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

¹¹ http://www.te.gob.mx/Informacion_judiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

¹² Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.

¹³ Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

¹⁴ Véase la jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091²².

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación¹⁵ ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la Sala Superior consideró en la sentencia referida, que para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la *Ley de Medios*, con fundamento en el diverso 441 de la *LGIPE*, lo que implica,

¹⁵ Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO**.

que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento sancionador ordinario una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, si no conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

4. HECHOS ACREDITADOS Y PRECISIONES

Como se ha mencionado, las denuncias presentadas por los *quejosos*, versan sobre la supuesta violación a su derecho de libertad de afiliación, al ser incorporados al padrón del *PVEM*, sin su consentimiento, así como la utilización de sus datos personales por dicho partido político para sustentar tal afiliación.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/SSN/CG/57/2017

Ahora bien, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de la infracción denunciada, debe precisarse lo siguiente:

I. Afiliación que, a juicio de esta autoridad, se realizó conforme con la normativa aplicable

Gloria del Carmen Tanori Ferrales		
Quejosa	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁶	Manifestaciones del Partido Político
Señaló que se encontró afiliada al partido político denunciado y que manifestaba su inconformidad por así convenir a sus intereses.	Informó que la denunciante aparecía en el padrón del partido político denunciado desde el <u>7 de diciembre de 2016.</u>	<p>Mediante escrito de veintinueve de diciembre de 2017,¹⁷ el partido político reconoció que la quejosa está afiliada a su partido desde el 7 de diciembre de 2016.</p> <p>En alcance a dicho escrito,¹⁸ presentó formato original de afiliación, aparentemente firmado por la quejosa.</p> <p>En sus escritos de contestación al emplazamiento y de desahogo de la vista de alegatos, el representante del partido político señaló que no existió afiliación indebida, ya que, a su decir, las afiliaciones que realiza ese instituto político se llevan a cabo conforme con sus Estatutos.</p> <p>Asimismo, manifestó que no existe uso indebido de los datos personales de la quejosa, ya que, del formato de afiliación en original que se aportó, se desprende que, la quejosa se afilió de manera libre a dicho partido, por lo que no existe una indebida afiliación.</p>
Observaciones		
Se dio vista a la denunciante con el formato de afiliación aportado por el partido político respecto de la quejosa, sin que ésta realizara manifestación alguna.		
Conclusiones		

¹⁶ Foja 157.

¹⁷ Foja 141.

¹⁸ Foja 145.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/SSN/CG/57/2017

Gloria del Carmen Tanori Ferrales
<p>La denunciante manifestó su inconformidad, respecto de su afiliación al <i>PVEM</i>, por así convenir a sus intereses.</p> <p>La <i>DEPPP</i> informó que la denunciante apareció en el padrón del partido político denunciado.</p> <p>El <i>PVEM</i> remitió a esta autoridad electoral formato original de afiliación de la ciudadana, mismo que fue puesto a la vista de la ciudadana, sin que ésta formulara objeción alguna al respecto; esta autoridad emitirá pronunciamiento en el siguiente apartado.</p>

II. Afiliaciones respecto de las que el partido político denunciado no acreditó el consentimiento de los ciudadanos

Sergio Loaiza Gómez		
Quejoso	Información proporcionada por la DEPPP¹⁹	Manifestaciones del Partido Político
<p>El denunciante manifestó que no realizó trámites de registro ni firmó solicitud de afiliación al partido denunciado</p>	<p>Informó que el quejoso se encontraba afiliado al <i>PVEM</i>, desde el <u>14 de octubre del año 2016</u>.</p>	<p>Mediante escrito de 8 de diciembre de 2017²⁰, el partido político manifestó que el quejoso es su militante, que no ha presentado renuncia y anexó copia simple de formato de afiliación, supuestamente firmado por el denunciante.</p> <p>En sus escritos de contestación al emplazamiento y de desahogo de la vista de alegatos, el representante del partido político señaló que no existió afiliación indebida, ya que, a su decir, las afiliaciones que realiza ese instituto político se llevan a cabo conforme con sus Estatutos.</p> <p>Por otra parte, el representante del partido político señaló que el formato original de afiliación del quejoso fue destruido e hizo referencia a dos Actas circunstanciadas levantadas por la Oficialía Electoral de este Instituto.</p> <p>Asimismo, manifestó que no existe uso indebido de los datos personales del quejoso; que el denunciante se afilió de manera libre a dicho partido, por lo que no existe una indebida afiliación; e invocó el principio de presunción de inocencia en su favor.</p>

¹⁹ Foja 159.

²⁰ Foja 27.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/SSN/CG/57/2017

Sergio Loaiza Gómez	
Conclusiones	
No existe controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del partido político.	
La DEPPP informó que el denunciante apareció en el padrón del partido político denunciado.	
Por cuanto hace a la constancia aportada por el <i>PVEM</i> , con la que pretende acreditar que la afiliación del quejoso se llevó a cabo conforme a la norma, así como las manifestaciones del señalado instituto político respecto de la destrucción de diversa información, esta autoridad emitirá pronunciamiento en el siguiente apartado.	

Miguel Ángel Hernández Estrada		
Quejoso	Información proporcionada por la DEPPP²¹	Manifestaciones del Partido Político
Señaló que al consultar el portal electrónico de este Instituto se encontró afiliado al <i>PVEM</i> que nunca se ha afiliado a partido político alguno.	El quejoso se encontraba afiliado al <i>PVEM</i> , desde el <u>10 de octubre de 2016</u> .	<p>Mediante escrito de 29 de diciembre de 2017,²² el ente político aceptó que el denunciante estaba afiliado al partido desde el 10 de octubre de 2016, que no ha presentado renuncia a su militancia; refirió que aportaba copias simples de constancias de afiliación, pero no anexó documentación alguna al respecto.</p> <p>En sus escritos de contestación al emplazamiento y de desahogo de la vista de alegatos, el representante del partido político señaló que no existió afiliación indebida, ya que, a su decir, las afiliaciones que realiza ese instituto político se llevan a cabo conforme con sus Estatutos.</p> <p>Por otra parte, el representante del partido político señaló que el formato original de afiliación del quejoso fue destruido e hizo referencia a dos Actas circunstanciadas levantadas por la Oficialía Electoral de este Instituto.</p> <p>Asimismo, manifestó que no existe uso indebido de los datos personales del quejoso; que el denunciante se afilió de manera libre a dicho partido, por lo que no existe una indebida afiliación; e invocó el principio de presunción de inocencia en su favor.</p>
Conclusiones		

²¹ Foja 157.

²² Foja 91.

Miguel Ángel Hernández Estrada

El partido político acepta que el ciudadano estuvo afiliado, es decir, no hay controversia al respecto; no obstante, no aporta probanza en el sentido de que la afiliación haya sido consentida por el ciudadano.

La DEPPP informó que el denunciante apareció en el padrón del partido político denunciado.

Por cuanto hace a las manifestaciones del señalado instituto político respecto de la destrucción de diversa información, esta autoridad emitirá pronunciamiento en el siguiente apartado.

Finalmente, debe precisarse que las constancias aportadas por la *DEPPP*, al ser documentos emitidos por autoridades dentro del ámbito de sus facultades, se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del *Reglamento de Quejas*, mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la *LGIPE* y 27, párrafo 2 del Reglamento citado; por tanto, tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

En el mismo tenor, las documentales allegadas al expediente por el partido político denunciado, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracción II del *Reglamento Quejas*; por lo que, por sí mismas, carecen de valor probatorio pleno, y sólo alcanzarán ese grado cuando, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, generen convicción en este *Consejo General* sobre la veracidad de los hechos a que se refieren, ello al tenor de lo preceptuado en los artículos 462, párrafo 3 de la *LGIPE*, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención.

5. CASO CONCRETO

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por los quejosos, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5 del *COFIPE*, cuyo contenido se replica en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; esto es, **partido político**, candidato o inclusive cualquier persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

Ahora bien, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, la autoridad debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

En principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita así como el señalamiento que formula en contra de la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde al quejoso.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la *Ley de Medios*, de aplicación

supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 de la *LGIPE*.

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, referido previamente, que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que contaba con el consentimiento de los quejosos para afiliarlos a su partido político, y no a los ciudadanos que negaron haber solicitado su inclusión en el padrón de militantes del *PVEM*.

El estudio de fondo del presente asunto se realizará en dos apartados:

I. Afiliación que, a juicio de esta autoridad, se realizó conforme con la normativa aplicable

Como se evidenció en los recuadros anteriores, el *PVEM* aportó una constancia de afiliación original, a nombre de Gloria del Carmen Tanori Ferrales, a fin de demostrar la libre voluntad de la quejosa para afiliarse a ese instituto político.

Conforme con los elementos que obran en autos, esta autoridad considera que la afiliación de la ciudadana en mención, se realizó conforme con las disposiciones legales aplicables; lo anterior se afirma así, con base en los siguientes razonamientos:

En principio, del escrito de queja presentado por la ciudadana en mención, se considera necesario destacar lo siguiente:

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que el día 7 de diciembre de 2017, al ingresar a la página del Instituto Nacional Electoral en la siguiente liga <http://actores-politicos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/consulta-afiliados/#/>, para verificar si aparecen mis datos personales en algún padrón de afiliados de los partidos políticos, me arroja el reporte que desde el día 07 de diciembre de 2016 me encuentro afiliado (sic) al Partido Verde Ecologista, de lo cual manifiesto mi inconformidad por

así convenir a mis intereses. Se adjunta comprobante impreso de afiliación a Partidos Políticos Nacionales y locales, con la que acredito la indebida afiliación del suscrito (sic) al partido de referencia.

La relevancia de lo transcrito, a juicio de esta autoridad, consiste en el hecho de que la quejosa no manifiesta de manera clara y contundente no haberse afiliado, ni tampoco niega haber firmado formato de afiliación, sino que señala únicamente que manifiesta su inconformidad *por así convenir a sus intereses* y que, la impresión que aporta acredita su indebida afiliación.

Por otra parte, debe también destacarse que, mediante Acuerdo de treinta de abril de dos mil dieciocho, la autoridad tramitadora del presente procedimiento ordenó poner a la vista de la quejosa, copia simple del formato de afiliación aportado por el partido político denunciado; diligencia que fue cumplimentada el cuatro de mayo de la señalada anualidad,²³ sin que la denunciante haya formulado objeción respecto de la constancia aportada por el *PVEM*.

Es decir, a juicio de esta autoridad, el que la denunciante Gloria del Carmen Tanori Ferrales no haya sido tajante en que la afiliación que denuncia se haya realizado sin su consentimiento; el que el partido político denunciado haya aportado una constancia de afiliación en original y, que respecto de tal constancia la quejosa no haya formulado manifestación alguna, a pesar de haber tenido oportunidad procesal para ello, lleva a concluir que, la afiliación que se denuncia se realizó con apego a la normativa electoral.

Por lo anterior, respecto de Gloria del Carmen Tanori Ferrales, el presente procedimiento debe determinarse **infundado**.

II. Afiliaciones respecto de las que el partido político denunciado no acreditó el consentimiento de los ciudadanos

Como se precisó en el apartado **HECHOS ACREDITADOS Y PRECISIONES**, está demostrado a partir de la información proporcionada por la *DEPPP* que Sergio Loaiza Gómez y Miguel Ángel Hernández Estrada se encontraron, en ese momento, como afiliados del *PVEM*.

²³ Folios ***_***

Por otra parte, el *PVEM* no demostró con medios de prueba, que la afiliación respectiva sea el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de tales ciudadanos, debiendo reiterar que la carga de la prueba corresponde al citado instituto político, en tanto que la carga para los actores consiste en demostrar que no dieron su consentimiento para ser afiliados, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba.

En tanto que el partido político denunciado, cuya defensa consiste básicamente en afirmar que sí cumplió las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación, tiene el deber de probar esa situación.

Ahora bien, tal y como quedó de manifiesto en el apartado del *MARCO NORMATIVO* de la presente Resolución, así como en el correspondiente a *CARGA Y ESTANDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO*, la libertad de afiliación en materia político-electoral, es un derecho reconocido y así garantizado para todo ciudadano de nuestro país, al menos desde hace varias décadas, tanto a nivel constitucional como legal, el cual es concebido como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido político, permanecer afiliado a éste, desafiliarse e, incluso, no pertenecer a ninguno. Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección de datos personales e información relacionada con la vida privada de las personas, es igualmente un derecho con una trayectoria de protección por demás lejana.

En este sentido, es pertinente dejar en claro que la garantía y protección a los citados derechos, evidentemente no deriva de disposiciones reglamentarias al interior de los institutos políticos, que prevean como obligación del partido político, la conservación de los expedientes de afiliación de cada miembro, ni tampoco a partir de la emisión de los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, emitidos por el propio INE en la Resolución CG617/2012, sino que, como se vio, el derecho tutelado deviene de disposiciones de rango supremo, el cual debe ser tutelado en todo momento, y no a partir de normas internas o reglamentarias que así lo establezcan.

En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos políticos es un derecho de los ciudadanos previsto como garantía constitucional en nuestro País desde hace décadas, también lo es la obligación de los partidos

políticos de preservar, y en su caso, de demostrar, en todo momento, que cualquier acto que engendre la voluntad de un ciudadano para formar parte en las filas de un instituto político, esté amparado en el o los documentos que demuestren indefectiblemente el acto previo del consentimiento, siendo **ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no se tiene o tenía el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes.**

Lo anterior, porque, como se mencionó, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que, de manera insuperable, el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberadamente la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad de conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

Pronunciamiento respecto de Sergio Loaiza Gómez

Del ciudadano en cita, el *PVEM* exhibió **copia simple** de formato identificado como *CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE AFILIACIÓN 2016-2017*, en el que se aprecia diversa información, así como lo que parecer ser firma autógrafa de quien, presuntamente, lo suscribió.

No obstante, en concepto de esta autoridad electoral, dicho medio de prueba es insuficiente para sustentar la debida afiliación del denunciante en cita, toda vez que la copia simple del formato antes referido no acredita la manifestación de la voluntad del quejoso, pues el hecho de tratarse de una mera copia fotostática, impide demostrar la libre afiliación del referido ciudadano, al no constituir un medio probatorio idóneo y tratarse un mero indicio que, por sí mismo, no genera convicción de los hechos que se pretenden acreditar.

Esto es, el denunciado no presentó algún otro elemento probatorio idóneo para acreditar que sí existió la voluntad de Sergio Loaiza Gómez, de pertenecer a las filas de ese ente político, como lo sería, el original del *formato de afiliación* correspondiente o, en su caso, cualquier otro documento que diera certeza a dicho medio de prueba, como lo serían, por ejemplo, documentales que evidenciaran el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas, el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras; ello, a pesar de las diversas oportunidades que tuvo durante la secuela procesal que integra el procedimiento administrativo sancionador citado al rubro, lo que de suyo, permite colegir que existe un allanamiento tácito del denunciado a lo referido por el quejoso.

Por tanto, es válido concluir que, el elemento probatorio aportado por el denunciado, consistente en copia simple de formato identificado como *CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE AFILIACIÓN 2016-2017* del ciudadano cuyo caso aquí se estudia, no es suficiente ni idóneo para acreditar que medió el consentimiento expreso de éste para querer pertenecer a la lista de agremiados del *PVEM*.

En efecto, en el caso que se analiza, el *PVEM* presentó copia simple del documento antes referido, para demostrar la debida afiliación de Sergio Loaiza Gómez, lo cual, de suyo constituye una prueba documental privada, en términos de lo dispuesto en

los artículos 461, párrafo 3, inciso b) de la *LGIP* y 22, párrafo 1, fracción II, del *Reglamento de Quejas*.

En tal virtud, dicha documental no se considera suficiente para tener por demostrada la voluntad del quejoso de afiliarse al referido ente político, sino únicamente genera un indicio singular y aislado de lo que pretende probar el denunciado, toda vez que el *PVEM* no proporcionó el documento original atinente o algún otro que diera certeza probatoria a las copias simples.

Con base en lo expuesto, se considera que no debe concederse valor y eficacia probatoria alguna a la citada documental, ya que, con independencia de las razones expuestas en los párrafos que preceden, esta autoridad debe privilegiar y garantizar el derecho de libertad de afiliación en favor del ciudadano denunciante, toda vez que el partido político, al tratarse de un ente de interés público, tiene la obligación de acreditar con la documentación idónea la debida afiliación.

En ese sentido, los partidos políticos, como entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están obligados a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que las afiliaciones que realizan, deben ser de manera libre, voluntaria y personal y, como consecuencia de ello, **conservar y resguardar** y, en su caso, **exhibir** la documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho.

Por tanto, tales entes se encuentran compelidos a acreditar con las pruebas idóneas y correctas que las afiliaciones se realizaron conforme a las disposiciones legales y estatutarias, pues precisamente corresponde al oferente y más, tratándose de una institución política, acompañarla con los elementos suficientes para su perfeccionamiento y consiguiente valor legal.

Siendo menester señalar que, con la documental aludida se dio vista al denunciante, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación a tal constancia, sin perder de vista que el quejoso fue omiso en responder a tal solicitud; sin embargo, no debe pasar por desapercibido que Sergio Loaiza Gómez fue

contundente y categórico en manifestar en su escrito inicial de queja, que jamás dio su consentimiento para ser enlistado en el padrón de afiliados del denunciado.

Por tanto, se reitera que con la prueba presentada por el denunciado, no es dable concluir que existe la certeza que medió la voluntad del ciudadano de querer pertenecer a filas del *PVEM*, al tratarse de un indicio singular y aislado que no se encuentra corroborado por algún otro medio de prueba; por lo que es claro que sólo puede arrojar indicios en torno a la veracidad de lo afirmado por el ente de interés público, incapaz de corroborar su afirmación en torno a que la afiliación del quejoso a las filas del instituto político estuvo precedida de una manifestación de voluntad libre y auténtica.

En mérito de todo lo expuesto, se colige que existe evidencia que hace suponer que la transgresión al derecho de libre afiliación, en su modalidad positiva —afiliación indebida— a la que se refiere en este apartado, fue producto de una acción ilegal por parte del *PVEM*.

Pronunciamiento respecto de Miguel Ángel Hernández Estrada

El *PVEM* no demuestra con medios de prueba, que la afiliación respectiva sea el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual del ciudadano, en los cuales, el mismo, *motu proprio*, expresó su consentimiento y, por ende, proporcionó sus datos personales a fin de llevar a cabo la afiliación a dicho instituto político.

Al respecto, se debe recordar que, para el caso que nos ocupa, la carga de la prueba en torno a la acreditación de la voluntad del quejoso referente a su incorporación a las filas del partido corresponde al *PVEM*, en tanto que el dicho del actor consiste en sostener que no dio su consentimiento para ser afiliado, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba.

En tanto que los partidos políticos, cuya defensa consiste básicamente en afirmar que sí cumplieron las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación, tienen el deber de probar esa situación.

En este sentido, toda vez que el denunciante manifiesta no haber otorgado su consentimiento, que su afiliación se comprobó por esta autoridad electoral, y que el *PVEM* no cumplió su carga para demostrar que la afiliación sí se solicitó

voluntariamente; esta autoridad electoral considera que existe una vulneración al derecho de afiliación de quejoso y que, intrínsecamente, para la configuración de esa falta, el instituto político utilizó sin autorización sus datos personales, lo cual, debe ser considerado por esta autoridad para la imposición de la sanción que, en cada caso, amerite.

Ello es así, porque en ningún caso el *PVEM* aportó la cédula correspondiente, a fin de acreditar que el registro del mismo aconteció de forma libre, individual, voluntaria, personal y pacífica y que además para llevar a cabo ese trámite se cumplió con los requisitos establecidos para tal efecto en su normatividad interna.

En efecto, se considera que, en el caso, el medio de prueba esencial para acreditar la debida afiliación de esos ciudadanos es la cédula o, en su caso, cualquier otra documentación establecida en la normatividad del *PVEM*, en materia de afiliación, en la que constara el deseo del ciudadano de afiliarse a ese partido político, al estar impresa de su puño y letra, el nombre, firma, domicilio y datos de identificación, circunstancia que no aconteció.

En conclusión, toda vez que Sergio Loaiza Gómez y Miguel Ángel Hernández Estrada manifestaron no haber otorgado su consentimiento, que su afiliación se comprobó por la autoridad electoral competente, y que el *PVEM* no cumplió con su carga para demostrar que la afiliación sí se solicitó voluntariamente, esta autoridad electoral considera que existe una vulneración al derecho de afiliación de los quejosos y que, intrínsecamente, para la configuración de esa falta, utilizaron sin autorización sus datos personales, lo cual, debe ser considerado por esta autoridad para la imposición de la sanción que, en cada caso, amerite.

Lo anterior encuentra también sustento en lo establecido por la Sala Superior, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-141/2018, sentencia en la que estableció, en la parte que interesa, lo siguiente:

“...los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de un ciudadano pertenecer a un partido político, no puede alegar que existe uso indebido de sus datos personales porque se consideran públicos.”

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban pertenecer...”

Por otra parte, no pasa inadvertido para esta autoridad, que el partido político denunciado aportó constancias de las que se desprende, por una parte, que la Oficialía Electoral dio fé de que, en una bodega ocupada por el PVEM, se localizaba documentación que presentaba daños por humedad y, de igual forma, que la citada autoridad hizo constar que ese instituto político realizó, en noviembre de dos mil diecisiete, un proceso de reciclado de papelería.

De lo anterior, esta autoridad en modo alguno puede desprender, como conclusión válida, que entre la papelería dañada o reciclada se hayan encontrado las constancias originales de las afiliaciones denunciadas, pues no elaboraron listados de los documentos que fueron dañados o reciclados, de los que se desprenda que, entre tales materiales se encontraran, precisamente, las constancias con las que se hubiera podido acreditar la afiliación indebida que se le imputa.

Por otra parte, debe hacerse notar que, de las constancias que obran en autos, no se advierte que el PVEM haya implementado alguna medida para reponer las constancias de afiliación, con el objeto de respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, toda vez que por regla general, como se ha establecido a lo largo de la presente determinación, los partidos políticos tienen la carga de conservar, resguardar y en su caso restituir las documentales que acrediten la afiliación libre y voluntaria a su partido.

Finalmente, por lo que se refiere a las manifestaciones del partido político denunciado, en el sentido de que los escritos de queja de los denunciantes no pueden tenerse como una prueba válida en contra de ese instituto político, debe reiterarse, como se hace a lo largo de la presente determinación, que tales escritos no se valoran como una prueba, sino solamente como en inicio de la acción y que, a partir de ello, se traslada al partido político la obligación de probar, conforme con razonamientos ya expuestos en la presente determinación; lo anterior, conforme con la regla procesal de que no existe obligación de probar un hecho negativo.

En consecuencia, al determinarse que, respecto de Sergio Loaiza Gómez y Miguel Ángel Hernández Estrada el *PVEM* infringió la norma electoral ya señalada, lo conducente es establecer la sanción correspondiente.

CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS SANCIONES. Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de las faltas denunciadas, así como la responsabilidad por parte del *PVEM* en los casos detallados en el considerando que antecede, procede ahora determinar la sanción correspondiente, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, relativo a la gravedad de la responsabilidad en que se incurra; el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; y, en su caso, la reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.

En relación con ello, la *Sala Superior* ha sostenido que para individualizar la sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción electoral.

1. Calificación de la falta

A) Tipo de infracción

Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
La infracción se cometió por una acción del partido político denunciado, que transgredió disposiciones de la <i>Constitución</i> y de la <i>LGIPE</i> .	La conducta fue la afiliación indebida y el uso no autorizado de los datos personales de dos ciudadanos.	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la <i>Constitución</i> ; 443, párrafo 1, inciso a), de la <i>LGIPE</i> ; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la <i>Ley de Partidos</i> .

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o prohibidas.

En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el caso concreto, se acreditó que el *PVEM* incluyó indebidamente en su padrón de afiliados, a Sergio Loaiza Gómez y Miguel Ángel Hernández Estrada, sin demostrar que para incorporarlos medió la voluntad de éstos de inscribirse como militantes de dicho instituto político, violentando con ello la norma electoral, en específico las disposiciones precisadas en el recuadro inserto en el subapartado previo.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de los ciudadanos mexicanos, de optar libremente por ser o no militante de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, efectivamente consintieron libremente en ser sus agremiados.

Por otra parte, como se analizó, para la indebida afiliación acreditada en el expediente que se resuelve se usaron los datos personales de **dos** de los promoventes sin que éstos hubiesen otorgado su consentimiento para ello, lo cual, constituye un elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida.

En efecto, si bien es cierto, a partir de las constancias que obran en autos no está demostrado que los datos personales hubieran sido utilizados con un propósito diverso a la afiliación indebida en sí misma, o bien su difusión frente a terceros, lo es también que dicha información fue necesaria para materializar la incorporación de los datos de los actores al padrón de militantes del partido político denunciado.

De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción correspondiente al partido político involucrado.

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que el *PVEM* transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales, y que, tal infracción se cometió en detrimento de los derechos de más de un ciudadano, esta situación no conlleva estar en presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de afiliación al instituto político, quien incluyó en su padrón de militantes a **dos** de los hoy quejosos, sin demostrar el consentimiento previo para ello.

D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

- a) Modo.** En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles al *PVEM* consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *Ley de Partidos*, al incluir en su padrón de afiliados a **Sergio Loaiza Gómez y Miguel Ángel Hernández Estrada**, sin tener la documentación soporte que acredite fehacientemente la voluntad de éstos de pertenecer a las filas de dicho instituto político.

Como se ha precisado, las afiliaciones indebidas respecto de las que se entabló el presente procedimiento son un total de **dos**.

- b) Tiempo.** En el caso concreto, las afiliaciones indebidas acontecieron en diversos momentos, como se detalla en la tabla siguiente:

No	Ciudadano	Fecha de afiliación
1	Sergio Loaiza Gómez	14 de octubre de 2016
2	Miguel Ángel Hernández Estrada	10 de octubre de 2016

- c) **Lugar.** Con base en las razones plasmadas en los escritos de denuncias, se deduce que la falta atribuidas al partido político se cometieron de la siguiente manera:

No	Ciudadano	Estado
1	Sergio Loaiza Gómez	SINALOA
2	Miguel Ángel Hernández Estrada	CHIAPAS

E) Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Se considera que en el caso existe una conducta **dolosa** por parte del *PVEM*, en violación a lo previsto en los artículos ya establecidos en los párrafos anteriores.

La falta se califica como **dolosa**, por lo siguiente:

- El *PVEM* es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus de **entidad de interés público**, de conformidad con el artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la *Constitución*; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- El *PVEM*, como cualquier otro partido político, está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 25 de la *Ley de Partidos*.

- La libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.
- Todo partido político tiene la **obligación de respetar la libre afiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.
- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución* y 2, párrafo 1, incisos a y b, y 25, incisos a y e, de la *Ley de Partidos*.
- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria**.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, es una violación de orden constitucional y legal que **requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento.**

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta se considera dolosa, porque:

- 1) Los *quejosos* aducen que no solicitaron en momento alguno su registro o incorporación como militantes al partido hoy denunciado.
- 2) Quedó acreditado que *Sergio Loaiza Gómez y Miguel Ángel Hernández Estrada*, aparecieron en el padrón de militantes del *PVEM*.
- 3) El partido político denunciado no demostró que las afiliaciones de los *quejosos* se hubieran realizado a través de los mecanismos legales y partidarios conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y voluntaria de los denunciados.
- 4) El *PVEM* no demostró ni probó que la afiliación de los *quejosos* fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran como prueba plena, para estimar que la afiliación de los *quejosos* fue debida y apegada a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.

F) Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el *PVEM*, se cometió al afiliar indebidamente a **dos** ciudadanos, sin demostrar al acto volitivo de éstos tanto de inscribirse en su padrón de militantes como de haber proporcionado sus datos personales para ese fin.

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en garantizar el derecho de libre afiliación y la protección de los datos personales de los ciudadanos mexicanos y que la conducta se acredita ante la ausencia de los documentos atinentes que permitan demostrar el acto de voluntad de los ciudadanos quejosos de militar en el partido político denunciado, ni para el uso de sus datos personales.

2. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A. Reincidencia

Por cuanto a la **reincidencia** en que pudieron haber incurrido los partidos materia de esta Resolución, este organismo electoral autónomo considera que **no se actualiza**.

De conformidad con el artículo 458, párrafo 6 de la *LGIE*, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el mencionado *Código*, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, la *Sala Superior* ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);
2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
3. Que en ejercicios anteriores, el infractor **haya sido sancionado por esa infracción mediante Resolución o sentencia firme.**

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por la Sala Superior, a través de la Jurisprudencia 41/2010, cuyo rubro es: ***REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.***²⁴

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con anterioridad.

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador, se actualiza cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta.

En este sentido, debe precisarse que en el presente asunto, no puede considerarse actualizado dicho supuesto por cuanto hace al *PVEM*, pues en los archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya sancionado a ese ente político por faltas como la que se sanciona por esta vía, que se hayan dictado con anterioridad a los hechos materia de las presentes denuncias.

B. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

²⁴ De observancia obligatoria, en términos del artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, pues se comprobó que el *PVEM* afilió a **dos** de los *quejosos*, sin demostrar contar con la documentación que acredite que medió la voluntad de tales ciudadanos de pertenecer o estar inscritos a dicho instituto político.
- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, de optar por ser o no militante de algún partido político, y la obligación de éstos es velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer a los distintos partidos políticos.
- Para materializar la indebida afiliación de los *quejosos*, se utilizaron indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para formar el padrón de afiliados del partido político denunciado.
- No existió un beneficio por parte del *PVEM*, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral.

- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso Electoral.
- No existe reincidencia por parte del *PVEM*.

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente **calificar la falta** en que incurrió el partido político como de **gravedad ordinaria**, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el *PVEM*, dolosamente, infringió el derecho de libre afiliación de los hoy quejosos, lo que constituye una violación a un derecho fundamental de los ciudadanos.

C. Sanción a imponer

Ahora bien, la mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción.

Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor cuantía²⁵.

El artículo 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIPE*, dispone el catálogo de sanciones a imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México; reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita; y en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la *Constitución* y de la *LGIPE*, con la cancelación de su registro como partido político.

²⁵ Véase la tesis XXVIII/2003 de la Sala Superior, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción (especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción acreditada), así como la conducta realizada por el *PVEM* en el caso concreto, se determina que debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida.

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la *LGIPE*, confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realicen una falta similar.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que la *LGIPE* no hace una determinación pormenorizada y casuística, de todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo establecen las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

Asimismo, es importante tomar en cuenta el número de ciudadanos afiliados indebidamente al *PVEM*, es decir, los **dos ciudadanos** ya precisados previamente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/SSN/CG/57/2017

Con base en lo anterior, este *Consejo General* estima que, derivado de las circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida al partido político denunciado, justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 456, párrafo 1, inciso a) de la **LGPE**, consistente en una **MULTA unitaria por cuanto hace a cada uno de los dos ciudadanos sobre quienes se cometió la falta acreditada**, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto.

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la sanción a imponer.

En este orden de ideas, es pertinente hacer notar, que ha sido criterio de esta autoridad, al resolver los procedimientos UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y su acumulado, y UT/SCG/Q/MECG/JD06/CHIH/4/2016, el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis y siete de marzo de dos mil diecisiete, respectivamente —y que fue reiterado en el diverso SCG/Q/FSG/CG/33/INE/80/2014 Y SU ACUMULADO SCG/Q/JAEB/JL/CHIH/37/INE/84/2014, resuelto por este órgano máximo de dirección el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, bajo la clave INE/CG401/2017—, en los que se sancionó por una indebida afiliación de un ciudadano, en cada caso, con una multa equivalente a 642 (seiscientos cuarenta y dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento de la comisión de la conducta, sanción que se estima debe tomarse como base para el

presente asunto, si se considera que en dichos asuntos se demostró la comisión de una infracción similar a la que acontece en los casos que aquí se resuelven.

En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta causa, en específico **que no se refiere a la interposición de una sola queja** —a diferencia de lo que aconteció en los precedentes citados—, **sino de varias quejas y afiliaciones indebidas, las cuales han quedado acreditadas en autos**, es claro que la individualización de la sanción aplicada con motivo de la afiliación indebida de los ciudadanos al partido político denunciado, debe resultar proporcional al número de ciudadanos en cuyo perjuicio se cometió la falta, sin perder de vista las condiciones socioeconómicas del instituto político, y no simplemente los hechos denunciados y acreditados en el presente procedimiento, a fin de que la sanción que se imponga resulte efectivamente proporcional sin ser excesiva.

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad debe determinar su monto o cuantía, **tomando en cuenta** las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que corresponda.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la graduación de la sanción, lo cual resulta eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión que tiene sustento en la tesis relevante XXVIII/2003,²⁶ emitida por la Sala Superior, misma que a letra dice:

²⁶ Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 7, Año 2004, página 57.

SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.

- En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.

Ahora bien, a juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con base en lo dispuesto en la fracción II del artículo 456 de la *LGIPE*, lo procedente es imponer sendas **multas** equivalentes a **seiscientos cuarenta y dos días** de salario mínimo general para la Ciudad de México **por cada uno de los ciudadanos que se acreditó fueron afiliados indebidamente** y que aparecen en su padrón de afiliados.

En virtud de que los ciudadanos denunciados fueron afiliados en diferentes momentos, aun cuando se trata de una infracción de tracto sucesivo, es decir que se prolonga en el tiempo desde el momento en que el ciudadano es incorporado sin su consentimiento al padrón de afiliados de un partido político, hasta que deja de ser parte del mismo, para el cálculo de la multa correspondiente, se debe tomar en cuenta el salario mínimo vigente al momento de realizar la afiliación y, obtenido el monto correspondiente, deberá hacerse la conversión a Unidades de Medida y Actualización.

Al respecto, es un hecho notorio que se invoca en términos de lo establecido en el artículo 461 de la *LGIPE*, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fija anualmente los montos respectivos, mismos que al ser relacionados con las fechas de afiliación, para obtener la sanción que corresponde por cuanto a cada uno de los ciudadanos indebidamente afiliados, arrojan lo siguiente:

Sanción por ciudadano:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/SSN/CG/57/2017

No	Ciudadano	Fecha de afiliación	Salario Mínimo	Sanción a imponer
1	Sergio Loaiza Gómez	14/10/2016	73.04	\$46,891.68
2	Miguel Ángel Hernández Estrada	10/10/2016	73.04	\$46,891.68

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, pues sin ser gravosa, sí puede inhibir al *PVEM* para que en el futuro vigile el cumplimiento de las normas de la materia.

Ahora bien, es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la *Constitución* —efectuada por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones.

En esas condiciones, lo procedente es transformar la sanción que se considera idónea, construida a partir de la referencia legal de salarios mínimos, a Unidades de Medida y Actualización, para lo cual es necesario dividir el monto base establecido (la suma de multiplicar seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México por el salario mínimo vigente en el año correspondiente a la afiliación), entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, misma que equivale, para el ejercicio fiscal en curso, a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M. N.).

De esta manera, al aplicar la fórmula mencionada, respecto de cada uno de los ciudadanos que fueron afiliados indebidamente por el *PVEM*, se obtiene lo siguiente:

1. Sergio Loaiza Gómez, afiliado en el año 2016

El monto en pesos \$ 46,891.68 (que se obtiene de la referencia establecida en precedentes, de seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente, multiplicado por el salario mínimo del año en que se realizó la afiliación, 2016, esto es, \$73.04 —setenta y tres 04/100 M. N.—) se divide entre el valor actual de la

Unidad de Medida y Actualización, correspondiente a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.), y se obtiene que la sanción a imponer es una multa equivalente a **581.78 (quinientos ochenta y uno punto setenta y ocho)** Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, que resulta ser la sanción correspondiente respecto del ciudadano en cita, y su valor neto en pesos es de \$46,891.47 (cuarenta y seis mil ochocientos noventa y un pesos 47/100 M.N., redondeado al segundo decimal).

2. Miguel Ángel Hernández Estrada, afiliado en el año 2016

El monto en pesos \$ 46,891.68 (que se obtiene de la referencia establecida en precedentes, de seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente, multiplicado por el salario mínimo del año en que se realizó la afiliación, 2016, esto es, \$73.04 —setenta y tres 04/100 M. N.—) se divide entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, correspondiente a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.), y se obtiene que la sanción a imponer es una multa equivalente a **581.78 (quinientos ochenta y uno punto setenta y ocho)** Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, que resulta ser la sanción correspondiente respecto del ciudadano en cita, y su valor neto en pesos es de \$46,891.47 (cuarenta y seis mil ochocientos noventa y un pesos 47/100 M.N., redondeado al segundo decimal).

Entonces, al *PVEM* se habrá de aplicar una sanción por cada uno de los ciudadanos, como se ha explicado y se resume enseguida:

No	Ciudadano	Año de afiliación	Salario Mínimo	Multa en UMAS	Multa en pesos
1	Sergio Loaiza Gómez	2016	\$73.04	581.78	\$46,891.47
2	Miguel Ángel Hernández Estrada	2016	\$73.04	581.78	\$46,891.47

Debe precisarse que se considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, ya que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, se concluye que las mismas resultan eficaces y proporcionales.

Sirve de apoyo a los anteriores razonamientos, la tesis de jurisprudencia 10/2018, emitida por la Sala Superior, de rubro y texto:

MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.- De la interpretación sistemática de los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transitorios segundo y tercero del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como 44, párrafo primero, inciso aa), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando en consideración el principio de legalidad que rige en los procedimientos sancionadores, se advierte que el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del ilícito.

D. El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la infracción

Se estima que, respecto de la infracción cometida por parte del PVEM, aun cuando causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de la infracción.

E. Las condiciones socioeconómicas del infractor

Al respecto, resulta necesario precisar que, conforme con la información proporcionada por la DEPPP, a través del oficio **INE/DEPPP/DE/DPPF/5693/2018**, el monto de la ministración mensual para el sostenimiento de actividades ordinarias correspondiente al mes de septiembre de dos mil dieciocho para el PVEM —una vez deducidos los conceptos correspondientes a multas y sanciones y renuncia al financiamiento— es de \$15,360,795 (Quince millones trescientos sesenta mil setecientos noventa y cinco pesos 00/100 m.n.).

F. Impacto en las actividades del sujeto infractor

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta al *PVEM*, no resulta de carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida impuesta, por cada uno de los ciudadanos, representa únicamente 0.30% respecto al monto del financiamiento que el ente político denunciado recibirá por concepto de actividades ordinarias permanentes en el mes de septiembre de dos mil dieciocho, por lo que, resulta evidente que en modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del citado partido político.

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el partido político de mérito —tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagar sin que ello afecte sus operaciones ordinarias, además de que las sanciones son proporcionales a las faltas cometidas y se estima que, sin resultar excesivas ni ruinosas, pueden generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la Sala Superior en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-250/2009²⁷, es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción cometida por el *PVEM* (especialmente los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.

QUINTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE LOS QUEJOSOS COMO MILITANTES. En tal sentido, se tiene que la voluntad de los denunciantes es no pertenecer al *PVEM*, por lo que se debe vincular al partido político, para que, en el supuesto que los quejosos continúen en su padrón de militantes, **sin mayor trámite, cancele su registro, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución**, con efectos a partir de la fecha en que cada uno presentó su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la *UTCE*, los medios de prueba que amparen el cumplimiento.

²⁷ Consultable en la página <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm>

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017,²⁸ de cinco de enero del año en curso, sentencia en la que se concluyó la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el *INE*, que lo vincule con un instituto político en particular.

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, protegido en el artículo 17 de la Constitución Federal,²⁹ se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previstos en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara **infundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra de *PVEM*, por cuanto hace a **Gloria del Carmen Tanori Ferrales**, en términos del Considerando **TERCERO** de esta Resolución.

SEGUNDO. Se declara **fundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra del *PVEM*, por cuanto hace a Sergio Loaiza Gómez y Miguel Ángel Hernández Estrada, en términos del Considerando **TERCERO** de esta Resolución.

TERCERO. En términos del Considerando **CUARTO** de la presente Resolución, se impone al *PVEM*, **una multa en los términos que enseguida se precisan, respecto de cada uno de los ciudadanos de los que se acreditó la falta ya señalada:**

²⁸ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/JDC/2/SUP_2017_JDC_2-626321.pdf

²⁹ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª), Página: 2864, Rubro: “**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.**”

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/SSN/CG/57/2017

No	Ciudadano	Importe de la Multa
1	Sergio Loaiza Gómez	581.78 (quinientos ochenta y uno punto setenta y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$46,891.47 (cuarenta y seis mil ochocientos noventa y un pesos 47/100 M.N., redondeado al segundo decimal). [ciudadano afiliado en 2016]
2	Miguel Ángel Hernández Estrada	581.78 (quinientos ochenta y uno punto setenta y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$46,891.47 (cuarenta y seis mil ochocientos noventa y un pesos 47/100 M.N., redondeado al segundo decimal). [ciudadano afiliado en 2016]

CUARTO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7 de la *LGIFE*, el monto de las multas impuestas al **PVEM**, será deducido, según corresponda, de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su Considerando CUARTO.

QUINTO. Se vincula al **PVEM**, para que, en el supuesto que los quejosos continúen en su padrón de militantes, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución**, con efectos a partir de la fecha en que cada uno presentó su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la *UTCE*, los medios de prueba que amparen el cumplimiento, conforme lo dispuesto en el Considerando QUINTO.

SEXTO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previstos en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Notifíquese personalmente a Sergio Loaiza Gómez, Gloria del Carmen Tanori Ferrales y Miguel Ángel Hernández Estrada; así como al **PVEM**, por conducto de su representante ante este Consejo General; y por **estrados** a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1242/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ORDINARIO

EXPEDIENTE:

UT/SCG/Q/AMBN/JL/SIN/27/2018

DENUNCIANTES: ALMA MIREYA
BELTRÁN NÚÑEZ Y CELINA VITE
SÁNCHEZ.

DENUNCIADO: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/AMBN/JL/SIN/27/2018, INICIADO CON MOTIVO DE SENDAS DENUNCIAS EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA INDEBIDA AFILIACIÓN AL CITADO INSTITUTO POLÍTICO DE DOS CIUDADANAS Y, EN SU CASO, EL USO NO AUTORIZADO DE SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 12 de septiembre de dos mil dieciocho.

GLOSARIO	
COFIPE o Código	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DEPPP	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral

GLOSARIO	
<i>DERFE</i>	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE
<i>IFE</i>	El otrora Instituto Federal Electoral
<i>Instituto ó INE</i>	Instituto Nacional Electoral
<i>Ley de Medios</i>	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
<i>LGIPE</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>LGPP</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>PAN</i>	Partido Acción Nacional
<i>Sala Superior</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>Tribunal Electoral</i>	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

R E S U L T A N D O

1. DENUNCIAS. En las fechas que a continuación se citan, se recibieron dos escritos de queja signados por igual número de ciudadanas quienes, en esencia, alegaron la presunta indebida afiliación de estas, atribuida al *PAN* y, en su caso, el uso de sus datos personales para tal fin:

No.	Quejosa	Fecha de presentación
1	Alma Mireya Beltrán Núñez	24/enero/2018 ¹
2	Celina Vite Sánchez	08/febrero/2018 ²

2. REGISTRO, ADMISIÓN Y RESERVA DEL EMPLAZAMIENTO.³ El dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral instruyó el registro del procedimiento sancionador ordinario, al cual se le

¹ Visible a página 1-4 del expediente

² Visible a páginas 5-8 del expediente

³ Visibles a páginas 9-16 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMBN/JL/SIN/27/2018

asignó la clave **UT/SCG/Q/AMBN/JL/SIN/27/2018**, por la presunta indebida afiliación y el uso de datos personales por parte del *PAN*.

En el acuerdo en cita, se admitió a trámite el procedimiento de sanción señalado con anterioridad y se ordenó reservar lo conducente respecto al emplazamiento, hasta en tanto fueran compiladas y analizadas las constancias que integrarían dicho expediente, y se determinara la pertinencia o no de la realización de nuevas diligencias de investigación.

Finalmente, se ordenó la notificación de dicho acuerdo de admisión al *PAN*, así como a las dos ciudadanas denunciantes.

3. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.⁴ Con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, se emitió acuerdo en los que requirió a la *DEPPP* y al *PAN*, proporcionaran información relacionada con la presunta afiliación de las dos denunciantes, lo cual fue desahogado como se muestra a continuación:

Fecha de acuerdo	Sujeto requerido	Oficio	Fecha de Respuesta
16/02/2018	<i>DEPPP</i>	INE-UT/1606/2018 ⁵	21/02/2018 Correo institucional⁶
	<i>PAN</i>	INE-UT/1605/2018 ⁷	22/02/2018 Escrito⁸

4. EMPLAZAMIENTO.⁹ El ocho de marzo de dos mil dieciocho, se ordenó emplazar al *PAN*, como sujeto denunciado, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara los medios de prueba que estimara pertinentes.

Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito.

⁴ Visible a páginas 9-16 del expediente.

⁵ Visible a página 25 del expediente.

⁶ Visible a páginas 31-32 del expediente

⁷ Visible a página 22 del expediente.

⁸ Visible a páginas 34-57 del expediente.

⁹ Visible a páginas 65-72 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMBN/JL/SIN/27/2018

Dicha diligencia se desarrolló conforme a lo siguiente:

Denunciado	Oficio	Citatorio – Cédula – Plazo	Contestación al Emplazamiento
PAN	INE-UT/2304/2018 ¹⁰	Citatorio: 09/marzo/2018 ¹¹ Cédula: 12/marzo/2018 ¹² Plazo: 13 al 20 de marzo de 2018	21/marzo/2018 ¹³ Extemporánea

5. ALEGATOS.¹⁴ El veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a las partes, a efecto que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera, acuerdo que fue notificado y desahogado conforme al siguiente cuadro:

Sujetos	Oficio	Citatorio – Cédula – Plazo	Contestación a los Alegatos
Denunciantes			
Alma Mireya Beltrán Núñez	INE/SIN/05JDE/VE/0498/2018 ¹⁵	Citatorio: No aplica Cédula: 30/marzo/2018 ¹⁶ Plazo: 02 al 06 de abril de 2018	No formuló alegatos
Celina Vite Sánchez	INE-JDE34-MEX/VS/182/2018 ¹⁷	Citatorio: No aplica Cédula: 02/abril/2018 ¹⁸ Plazo: 03 al 09 de abril de 2018	No formuló alegatos
Denunciado			
PAN	INE-UT/3836/2018 ¹⁹	Citatorio: 28/marzo/2018 ²⁰ Cédula: 29/marzo/2018 ²¹ Plazo: 30 de marzo al 05 de abril de 2018	5/abril/2018 ²²

6. ELABORACIÓN DEL PROYECTO. En su oportunidad, toda vez que no había diligencias pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la Comisión de Quejas y Denuncias.

¹⁰ Visible a página 89 del expediente

¹¹ Visible a páginas 79-86 del expediente.

¹² Visible a páginas 87-88 del expediente.

¹³ Visible a páginas 94-137 del expediente

¹⁴ Visible a páginas 138-141 del expediente.

¹⁵ Visible a páginas 168 del expediente.

¹⁶ Visible a páginas 169 del expediente.

¹⁷ Visible a páginas 165 del expediente.

¹⁸ Visible a páginas 166 del expediente.

¹⁹ Visible a páginas 154 del expediente.

²⁰ Visible a páginas 149-153 del expediente.

²¹ Visible a páginas 155-156 del expediente.

²² Visible a páginas 161-163 del expediente.

7. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS. En la Octogésima Cuarta Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el seis de septiembre de dos mil dieciocho, la Comisión de mérito analizó el proyecto, y resolvió por unanimidad de votos de sus integrantes presentes, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión de Quejas y Denuncias, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIFE*.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIFE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte del *PAN*, en perjuicio de los ciudadanos que han sido señalados a lo largo de la presente determinación.

Ahora bien, conforme al artículo 23 del *COFIPE*, los partidos políticos ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en el citado Código, correspondiendo al Instituto Federal Electoral —hoy INE— vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n); y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta,

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMBN/JL/SIN/27/2018

los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho Código, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38, del dispositivo legal en cita, las cuales son sancionables por el *Consejo General*.

Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443 párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la *LGIPE* y 25, de la *LGPP*, respectivamente.

En consecuencia, siendo atribución del máximo órgano de dirección del *INE* conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, esta autoridad resulta competente para conocer y resolver respecto de las presuntas infracciones denunciadas en el procedimiento sancionador ordinario, atribuidas al *PAN*, derivado, esencialmente, de la presunta indebida afiliación al citado instituto político y, utilización indebida de datos personales.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,²³ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.

²³ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de ciudadanos.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIPE* —los cuales contienen reglas que ya se encontraban previstas en el *COFIPE*, en los artículos 342, párrafo 1, incisos a); 356, 361, 364, 365 y 366—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO

En el presente asunto se debe subrayar que la presunta falta (indebida afiliación) respecto de la ciudadana **Celina Vite Sánchez**, se cometió **durante la vigencia del COFIPE**, puesto que el registro o afiliación de citada quejosa al *PAN* se realizó el trece de diciembre de dos mil trece, fecha en la cual se encontraba vigente dicho código.

En efecto, de conformidad con lo establecido en el Punto cuarto de los Lineamientos para la Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su registro, aprobados por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG617/2012, de treinta de agosto de dos mil doce, los Partidos Políticos Nacionales debían capturar en el *Sistema de Cómputo desarrollado por la Unidad Técnica de Servicios de Informática*, los datos de todos sus afiliados en el periodo comprendido **entre el uno de abril de dos mil trece y el treinta y uno de marzo de dos mil catorce**, siendo que el registro realizado aconteció en ese periodo, fechas que corresponde ser anterior al inicio de vigencia de la *LGIPE*.

Por tanto, si al momento de la comisión de la presunta falta se encontraba vigente el COFIPE,²⁴ es claro que este ordenamiento legal debe aplicarse para las cuestiones sustantivas del presente procedimiento, al margen que las

²⁴ El *COFIPE* estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce

faltas pudieran haber sido advertidas por la quejosa y cuestionadas mediante la queja que dio origen al presente asunto, una vez que dicha norma fue abrogada por la *LGIPE*, así como que este último ordenamiento sea fundamento para cuestiones procesales o adjetivas.

No obstante, para el caso correspondiente a la quejosa Alma Mireya Beltrán Núñez, la normatividad aplicable será la *LGIPE*, ello es así, toda vez que de la información que obra en autos, la única certeza que tiene esta autoridad, es la fecha de cancelación de su registro como afiliada al *PAN*, esto es el quince de noviembre de dos mil diecisiete, por lo que se estima prudente, aplicable el ordenamiento legal en cita.

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO

1. LITIS

En el presente asunto se debe determinar si el *PAN* afilió indebidamente o no a las dos ciudadanas que alegan no haber dado su consentimiento para estar en sus filas y, en su caso, el uso indebido de sus datos personales para tal fin, haciendo para ello uso ilegítimo de su información personal, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*.

2. MARCO NORMATIVO

A) Constitución, tratados internacionales y ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

“Artículo 6

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: ...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijan las leyes.

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

...

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de

organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.”

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no sólo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la *Constitución*, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracción I, párrafo segundo, *in fine*, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafilarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 24/2002 emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro ***DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES***.²⁵

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

²⁵ Consultable en la página: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,²⁶ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su

²⁶ Consultable en la página https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes — asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

“Artículo 23. Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:

I...

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:

- a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y
- b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.”

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que, en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;

- Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
- Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGPE*, que es obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del Consejo General del *IFE* por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *H. Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de

adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su constitución y registro.

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.
- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales

y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que, en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la *Constitución*, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta su libertad de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la *Constitución* y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna del PAN

Como se ha mencionado anteriormente, la obligación de los partidos políticos de garantizar el derecho de libre afiliación de sus agremiados, deviene de las propias disposiciones constitucionales, legales y convencionales a que se ha hecho referencia párrafos arriba, por tanto, su cumplimiento, en modo alguno, se encuentra sujeto a las disposiciones internas que cada instituto tiene en su haber normativo.

No obstante, a efecto de tener claridad acerca del proceso que un ciudadano debe llevar a cabo para convertirse en militante del partido político ahora denunciado, se

hace necesario analizar la norma interna del *PAN*, para lo cual, enseguida se transcribe la parte conducente de su Estatuto, en los términos siguientes:²⁷

“ ...

ESTATUTO DEL PAN

TÍTULO SEGUNDO

DE LOS MILITANTES Y SIMPATIZANTES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

CAPÍTULO PRIMERO

DE LOS MILITANTES

Artículo 8

1. Son militantes del Partido Acción Nacional, los ciudadanos mexicanos que, de forma directa, personal, presencial, **individual, libre**, pacífica y voluntaria, **manifiesten su deseo de afiliarse**, asuman como propios los principios, fines, objetivos y documentos básicos del Partido Acción Nacional, y sean aceptados con tal carácter.

...

Artículo 9

1. El procedimiento de afiliación se regirá conforme a lo previsto en el Reglamento correspondiente. La solicitud **se presentará por escrito y podrá realizarse ante cualquier Comité del Partido de la entidad federativa correspondiente**, independientemente donde se encuentre su domicilio. Los mexicanos residentes en el extranjero, se podrán afiliar fuera del territorio nacional.

...

Artículo 10

1. Para ser militante, se requiere cumplir con los siguientes **requisitos**:

- a)** Ser ciudadano mexicano;
- b)** Tener un modo honesto de vivir;
- c)** Haber participado en la capacitación coordinada o avalada por el área correspondiente del Comité Ejecutivo Nacional;
- d)** **Suscribir el formato aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional**, acompañando copia de su credencial para votar con fotografía vigente, emitida por

²⁷ Consultados en el enlace electrónico <http://www.pan.org.mx/wp-content/uploads/2016/11/ESTATUTOS-GENERALES-VIGENTES-DOF-26092017.pdf>, el doce de abril de dos mil dieciocho.

el Instituto Nacional Electoral; en el caso de mexicanos que residan en el extranjero, podrán acompañar copia de la matrícula consular.
...”

De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente:

- El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, fundamentalmente, en la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para decidir **libre e individualmente** si desean formar parte de los partidos y agrupaciones políticas.
- Afiliado o militante es el ciudadano que libre, voluntaria e individualmente, acude a un partido político para solicitar su incorporación al padrón de militantes respectivo, a través de los documentos aprobados por los órganos partidistas correspondientes.
- Al *PAN* podrán afiliarse los ciudadanos que, libre e individualmente, expresen su voluntad de integrarse al partido.
- Para obtener la afiliación al partido de referencia, se requiere, además de ser ciudadano mexicano y expresar **su voluntad libre, individual y pacífica de afiliarse** al Partido, **suscribir personalmente** la solicitud de alta como militante.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- En términos de lo previsto en el artículo 16, párrafo segundo de la *Constitución*, toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.

- Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán contemplar en sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos.

D) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la *Constitución*, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

3. CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante del *PAN*, por regla general debe acudir a las instancias partidistas competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso en particular el *PAN*), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del *COFIPE*, precepto que, derivado de la

reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la *LGPP*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que además los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la *Constitución*, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y voluntaria.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la Sala Superior, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**,²⁸ donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia 21/2013, de rubro: **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,²⁹ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria³⁰ y como estándar probatorio³¹.

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

²⁸ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_judicial/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

²⁹ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60

³⁰ Tesis de Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

³¹ Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. Véase la nota 35.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación³² ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la *Sala Superior* consideró en la sentencia referida, que, para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2,

³² Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO**.

de la *Ley de Medios*, con fundamento en el diverso 441 de la *LG/PE*, lo que implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento ordinario sancionador una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino que conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberadamente la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

4. HECHOS ACREDITADOS Y PRECISIONES

Como se ha mencionado, las denuncias presentadas por las *quejosas*, versan sobre la supuesta violación a su derecho fundamental de libertad de afiliación política, al haber sido incorporadas al padrón del *PAN*, sin su consentimiento previo y, como conducta infractora inherente a ella, la utilización de sus datos personales para sustentar tal afiliación.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMBN/JL/SIN/27/2018

Ahora bien, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de las infracciones objeto de las denuncias, en los siguientes recuadros se resumirá, por cada una de las ciudadanas denunciadas, la información derivada de la investigación preliminar implementada, así como las conclusiones que, en cada caso, fueron advertidas, de conformidad con lo siguiente:

N°	Ciudadana	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP ³³	Manifestaciones del Partido Político ³⁴
1	Alma Mireya Beltrán Núñez	24 de enero de 2018 ³⁵	Informó, que Alma Mireya Beltrán Núñez, no fue localizada dentro de los registros del padrón de afiliados del PAN.	Informó que estuvo afiliada anteriormente a dicho instituto político, causando baja del padrón de militantes en fecha quince de noviembre de dos mil diecisiete , en virtud de la aplicación del Programa Específico de revisión, verificación actualización, depuración y registro de huellas digitales, implementado por el Registro Nacional de Militantes en coordinación con la Comisión Especial Estratégica para la Transparencia y Reingeniería del Padrón de Militantes del PAN, sin que haya exhibido documento alguno que acredite la afiliación de la citada quejosa.

³³ Respuesta DEPPP-2018-2048. Visible a páginas 31 y 32 del expediente.

³⁴ Oficio RPA2-0067/2018. Visible a páginas 34 al 57 del expediente.

³⁵ Visible a página 2 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMBN/JL/SIN/27/2018

N°	Ciudadana	Escrito de queja	Información proporcionada por la <i>DEPPP</i> ³³	Manifestaciones del Partido Político ³⁴
Conclusiones				
<p>1. La quejosa precisa que no otorgó su consentimiento para afiliarse al <i>PAN</i>.</p> <p>2. De la impresión de respuesta firmada digitalmente por el Titular de la <i>DEPPP</i>, mediante el número de gestión <i>DEPPP</i>-2018-2048, se desprende que la quejosa no fue localizada dentro de los registros del padrón de afiliados del partido político denunciado.</p> <p>3. El <i>PAN</i> señaló que la quejosa estuvo afiliada anteriormente a ese instituto político, causando baja del padrón de militantes el quince de noviembre de dos mil diecisiete.</p> <p>No pasa desapercibida la manifestación del partido político denunciado en el sentido de que “...Los CC. Celina Vite Sánchez y Alma Mireya Beltrán Núñez estuvieron afiliados anteriormente a este instituto político causando baja del padrón de militantes en fecha 15 de noviembre de 2017, en virtud de la aplicación del Programa Específico de revisión, verificación actualización, depuración y registro de huellas digitales, implementado por el Registro Nacional de Militantes en coordinación con la Comisión Especial Estratégica para la Transparencia y Reingeniería del Padrón de Militantes del Partido Acción Nacional...”; confesional cobra relevancia en el caso que nos ocupa, toda vez que el citado instituto político corrobora de una manera indirecta que la ciudadana se encontraba afiliada al mismo.</p> <p>El <i>PAN</i> no demostró que la afiliación de la quejosa se hubiera realizado a través de los mecanismos legales y partidarios conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y voluntaria de la misma.</p> <p>No se ofrecieron argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun indiciaria, para estimar que la afiliación de la quejosa fue debida y apegada a Derecho, no obstante que, como se ha precisado, le corresponde la carga procesal de hacerlo.</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la denunciante fue militante de <i>PAN</i>, que dicha ciudadana negó haberse afiliado a ese partido político y que éste no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMBN/JL/SIN/27/2018

N°	Ciudadana	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP ³⁶	Manifestaciones del Partido Político ³⁷
2	Celina Vite Sánchez	08 de febrero de 2018 ³⁸	Afiliada 13/12/2013	Informó que estuvo afiliada anteriormente a dicho instituto político, causando baja del padrón de militantes en fecha quince de noviembre de dos mil diecisiete , en virtud de la aplicación del Programa Específico de revisión, verificación actualización, depuración y registro de huellas digitales, implementado por el Registro Nacional de Militantes en coordinación con la Comisión Especial Estratégica para la Transparencia y Reingeniería del Padrón de Militantes del <i>PAN</i> , sin que haya exhibido documento alguno que acredite la afiliación de la citada quejosa.
Conclusiones				
<p>1. La quejosa precisa que no otorgó su consentimiento para afiliarse al <i>PAN</i>.</p> <p>2. La DEPPP informó que la quejosa apareció en el padrón de militantes del <i>PAN</i>, lo cual fue confirmado por el instituto político denunciado.</p> <p>3. El <i>PAN</i> señaló que la quejosa estuvo afiliada anteriormente a ese instituto político, causando baja del padrón de militantes en fecha quince de noviembre de dos mil diecisiete.</p>				

³⁶ Respuesta DEPPP-2018-2048. Visible a páginas 31 y 32 del expediente.

³⁷ Oficio RPA2-0067/2018. Visible a páginas 34 al 57 del expediente.

³⁸ Visible a página 6 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMBN/JL/SIN/27/2018

N°	Ciudadana	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP ³⁶	Manifestaciones del Partido Político ³⁷
4.				<p>El <i>PAN</i> no demostró que la afiliación de la quejosa se hubiera realizado a través de los mecanismos legales y partidarios conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y voluntaria de la misma.</p> <p>No se ofrecieron argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun indiciaria, para estimar que la afiliación de la quejosa fue debida y apegada a Derecho, no obstante que, como se ha precisado, le corresponde la carga procesal de hacerlo.</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la denunciante fue militante de <i>PAN</i>, que dicha ciudadana negó haberse afiliado a ese partido político y que éste no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>

Finalmente, debe precisarse que las constancias aportadas por la *DEPPP*, al ser documentos emitidos por autoridades dentro del ámbito de sus facultades, se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del Reglamento de Quejas y Denuncias del *INE*, mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la *LGIPE* y 27, párrafo 2 del Reglamento citado; por tanto, tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

Por otra parte, las documentales allegadas al expediente por el partido político denunciado, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracción II del Reglamento de Quejas y Denuncias del *INE* y, por tanto, por sí mismas carecen de valor probatorio pleno; sin embargo, podrán generar plena convicción en esta autoridad, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio; ello, al tenor de los artículos 462, párrafo 3 de la *LGIPE*, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención.

5. CASO CONCRETO

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por las quejosas, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5, del *COFIPE*, cuyo contenido

se replica en el diverso 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, se debe verificar que esa situación antijurídica sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; es decir, partido político, candidato o inclusive cualquier persona física o moral; dicho de otra forma, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De esta forma, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

En tal sentido, por cuanto hace a la existencia del supuesto normativo, debe reiterarse, como se estableció en apartados previos, que desde hace décadas está reconocido en la legislación de este país, la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, y de igual manera, que las personas en este país tienen el derecho de que se proteja su información privada y sus datos personales, todo lo cual está previsto desde el nivel constitucional.

En el caso, si bien en el marco normativo se hace referencia a los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, identificados con el número de resolución CG617/2012 y, de igual manera se transcribe la parte de disposiciones estatutarias

del partido político denunciado, relacionada con el procedimiento de afiliación, lo cierto es que, por el carácter constitucional de tales derechos, la existencia de los mismos —y las obligaciones correlativas a éstos—, no está condicionada al reconocimiento por parte de los sujetos obligados, en este caso, de los partidos políticos.

En otras palabras, si la libertad de afiliación política, en todas sus vertientes, es un derecho de los ciudadanos de este país desde hace varios decenios, resulta por demás evidente que las obligaciones de los partidos políticos que deriven de esta garantía -respetar la libertad de afiliación o, en su caso, la decisión de no pertenecer más a un partido, así como acreditar fehacientemente el consentimiento del ciudadano para cualquier caso- no debe estar sujeta o condicionada a que éstos establezcan en sus normas internas disposiciones encaminadas a su protección, es decir, esta carga que se les impone no depende del momento en el que los partidos políticos hayan incluido en sus normas internas la obligación de que la afiliación sea voluntaria.

Por cuanto hace al elemento subjetivo señalado líneas arriba, debe destacarse que, la autoridad, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

En principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento que formula en contra de la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde al quejoso.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la *Ley de Medios*, de aplicación

supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 de la *LGIPE*.

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que contaba con el consentimiento de las quejas para afiliarlas a su partido político, y no a las ciudadanas que negaron haber solicitado su inclusión en el padrón de militantes del PAN.

Así, como vimos, en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, está demostrado a partir de la información proporcionada por la *DEPPP* que la ciudadana denunciante Celina Vite Sánchez se encontró, en ese momento, como afiliada del *PAN*.

Asimismo, de autos se advierte que el partido político denunciado manifestó expresamente que las quejas estuvieron afiliadas anteriormente a dicho ente.

Aunado a lo anterior, el *PAN* no demostró con medios de prueba, que las afiliaciones respectivas sean el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de las ciudadanas **Alma Mireya Beltrán Núñez y Celina Vite Sánchez**, en los cuales, ellas misma, *motu proprio*, expresaron su consentimiento y, por ende, proporcionaron sus datos personales a fin de llevar a cabo la afiliación a dicho instituto político.

Debiendo precisar que la carga de la prueba corresponde al *PAN*, en tanto que la carga para las actoras consiste en demostrar que no dieron su consentimiento para ser afiliadas, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba.

En tanto que el partido político denunciado, cuya defensa consiste básicamente en afirmar que sí cumplió las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación, tiene el deber de probar esa situación.

Ahora bien, tal y como quedó de manifiesto en el apartado del *MARCO NORMATIVO* de la presente Resolución, así como en el correspondiente a *CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO*, **la libertad de afiliación en materia político-electoral, es un derecho reconocido y así garantizado para todo ciudadano de nuestro país**, al menos desde hace varias décadas, tanto a nivel constitucional como legal, **el cual es concebido como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido político, permanecer afiliado a éste, desafiliarse e, incluso, no pertenecer a ninguno**. Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección de datos personales e información relacionada con la vida privada de las personas, es igualmente un derecho con una trayectoria de protección por demás lejana.

En este sentido, es pertinente dejar en claro que la garantía y protección a los citados derechos, evidentemente no deriva de disposiciones reglamentarias al interior de los institutos políticos, que prevean como obligación del partido político, la conservación de los expedientes de afiliación de cada miembro, ni tampoco a partir de la emisión de los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, emitidos por el propio INE en la Resolución CG617/2012, sino que, como se vio, el derecho tutelado deviene de disposiciones de rango supremo, el cual debe ser tutelado en todo momento, y no a partir de normas internas o reglamentarias que así lo establezcan.

En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos políticos, en todas sus vertientes, es un derecho de los ciudadanos previsto como garantía constitucional en nuestro País desde hace décadas, también lo es la obligación de los partidos políticos de preservar, y en su caso, de demostrar, en todo momento, que cualquier acto que engendre la voluntad de un ciudadano para formar parte en las filas de un instituto político, o bien, ya no pertenecer a estos, deben estar amparados en el o los documentos que demuestren indefectiblemente el acto previo del consentimiento –para los casos en que se aduce no mediar

consentimiento previo para ser afiliados- siendo **ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no se tiene o tenía el deber de presentar los medios de prueba que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes o que las mismas hayan sido destruidas por acuerdo emitido por su Comisión de Afiliación del Consejo Nacional del PAN.**

Lo anterior, porque, como se mencionó, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de a filiación de militantes, no implica que, de manera insuperable, el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En este sentido, toda vez que las denunciantes manifiestan no haber otorgado su consentimiento, que su afiliación se comprobó tanto por la información proporcionada por la autoridad electoral competente -en el caso de Celina Vite Sánchez-, así como derivado de la confesional realizada por parte del partido político denunciado –en el supuesto de Alma Mireya Beltrán Núñez- y que el PAN, no cumplió su carga para demostrar que las afiliaciones sí se solicitaron voluntariamente; **esta autoridad electoral considera que existe una vulneración al derecho de afiliación de las quejas Celina Vite Sánchez y Alma Mireya Beltrán Núñez y que, intrínsecamente, para la configuración de esa falta utilizaron sin autorización sus datos personales**, lo cual, debe ser considerado por esta autoridad para la imposición de la sanción que amerite.

Así, respecto a las **dos (2) ciudadanas Celina Vite Sánchez y Alma Mireya Beltrán Núñez**, el presente procedimiento sancionador ordinario es **FUNDADO** en contra del PAN, por las razones y consideraciones siguientes:

De las constancias que obran en autos se advierte lo siguiente:

- **Alma Mireya Beltrán Núñez y Celina Vite Sánchez**, manifestaron no haber otorgado su consentimiento para ser afiliadas al ente político denunciado.

- La *DEPPP* detectó el registro de **Celina Vite Sánchez** como afiliada del *PAN*, con fecha de registro de trece de diciembre de dos mil trece.
- Si bien el registro de afiliación de **Alma Mireya Beltrán Núñez** no fue comprobado por la autoridad electoral competente (*DEPPP*), lo cierto es que **el *PAN* manifestó expresamente que la denunciante estuvo afiliada** anteriormente a dicho instituto político, causando baja del padrón de militantes el quince de noviembre de dos mil diecisiete.
- El partido político denunciado, no cumplió su carga probatoria para demostrar que la afiliación de las quejas sí se solicitó voluntariamente. Esto es, el *PAN* no aportó las cédulas de afiliación correspondientes.

En virtud a lo anterior, esta autoridad electoral considera que existe una vulneración al derecho de afiliación de las quejas y que, intrínsecamente, para la configuración de esa falta utilizaron sin autorización sus datos personales, lo cual, debe ser considerado por esta autoridad para la imposición de la sanción que amerite.

En principio, es importante señalar que, como se ha venido mencionado en párrafos anteriores que, en uso de las facultades de investigación de esta autoridad electoral nacional, se requirió tanto a la *DEPPP* órgano central del *INE* encargado de la concentración de los padrones de los diversos Partidos Políticos Nacionales, como al *PAN*, para que proporcionara información y documentación sobre la afiliación de las quejas en cuestión.

Atento a lo anterior, a través de correo electrónico enviado el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho,³⁹ la *DEPPP* informó que **detectó el registro de Celina Vite Sánchez** como afiliada del *PAN* de trece de diciembre de dos mil trece, y, en el caso de **Alma Mireya Beltrán Núñez**, la quejosa no fue localizada dentro de los registros del padrón de afiliados del partido político denunciado.

³⁹ Visible a páginas 31 y 32 del expediente.

Por su parte, mediante oficio RPAN2-0067/2018,⁴⁰ el PAN informó, en lo que interesa, las siguientes cuestiones:

*...Los **CC. Celina Vite Sanchez y Alma Mireya Beltrán Núñez** estuvieron afiliados anteriormente a este instituto político **causando baja del padrón** de militantes en fecha 15 de noviembre de 2017, en virtud de la aplicación del Programa Específico de revisión, verificación actualización, depuración y registro de huellas digitales, implementado por el Registro Nacional de Militantes en coordinación con la Comisión Especial Estratégica para la Transparencia y Reingeniería del Padrón de Militantes del Partido Acción Nacional.*

*En lo correspondiente a los mencionados ciudadanos, se informa que la aplicación del Programa correspondiente al Estado de México y Sinaloa fueron aprobados por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional en fecha 26 de abril de 2017, habiéndose identificado con las claves CEN/SG/26/2017 y CEN/SG/23/2017 respectivamente, mismos que se adjuntan en copia simple al presente y que en su momento fueron consultables en la dirección electrónica del Registro Nacional de Militantes. En este sentido, es de informarse que dichos programas fueron realizados a efecto de actualizar y depurar la información del padrón de militantes del Partido Acción Nacional. Asimismo, los ciudadanos militantes de este instituto político, debieron expresar por escrito, con firma autógrafa y proporcionando su huella dactilar, la voluntad de estar afiliado al PAN, así como desconocer y renunciar a la militancia que en su caso existiere en otro partido político diferente al PAN, sin que dicha situación ocurriera con los **CC. Celina Vite Sánchez y Alma Mireya Beltrán Núñez**.*

Por lo anterior, y como consecuencia de la voluntad de los ciudadanos, expresada al no acudir a actualizar sus datos, este instituto político procedió a procesar su baja por la causal de depuración en términos de lo establecido en el artículo 72, fracción VII, y 79 del Reglamento de Militantes, así como en los Acuerdos identificados con las claves CEN/SG/26/2017 y CEN/SG/23/2017 respectivamente...

De lo anterior, se advierten tres cuestiones esenciales:

1. La **DEPPP** informó que **detectó el registro de Celina Vite Sánchez** como afiliada del **PAN** de trece de diciembre de dos mil trece.
2. Si bien la **DEPPP** informó que **Alma Mireya Beltrán Núñez** no fue localizada dentro de los registros del padrón de afiliados del **PAN**, lo cierto es que dicho partido

⁴⁰ Visible a páginas 34 - 57 del expediente.

político reconoce la afiliación de la quejosa, al manifestar que ...**Alma Mireya Beltrán Núñez** [estuvo afiliada] *anteriormente a este instituto político causando baja del padrón de militantes en fecha 15 de noviembre de 2017...*; confesional que cobra relevancia al caso, toda vez que, el ente político denunciado corrobora de una manera indirecta que la ciudadana se encontraba afiliada a dicho instituto.

3. Como se indicó, el *PAN* reconoce la afiliación de las ciudadanas denunciantes, mismas que, según su dicho, el quince de noviembre de dos mil diecisiete, han causado baja de su padrón de afiliados en razón de la aplicación del Programa Específico de Revisión, Verificación, Actualización, Depuración y Registro de Huellas Digitales, cuyo objetivo fue que las personas militantes de ese partido, expresaran por escrito, con firma autógrafa y huella dactilar, la voluntad de estar afiliadas al *PAN*, sin que esta situación ocurriera con las denunciantes.

Sobre esto último, se debe precisar que tal argumento resulta ser intrascendente en el presente asunto, ya que la cuestión a dilucidar es si se encuentra acreditada la afiliación libre, individual, voluntaria, personal y pacífica de las denunciantes por parte del *PAN*, en los términos establecidos en su normatividad interna, esto, independientemente, de que las ciudadanas quejasas sigan manteniendo o no su registro en dicho instituto político.

En efecto, si el recurrente fue acusado de afiliar a las ciudadanas sin su consentimiento, no es suficiente que se defienda reconociendo la afiliación y, en su caso, aduciendo la baja de registro de militancia de las ciudadanas, porque necesariamente se encuentra obligado a demostrar que la solicitud de ingreso al partido fue voluntaria, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

Es decir, una vez acreditada la afiliación de las quejasas al instituto político denunciado, en el caso de Alma Mireya Beltrán Núñez por medio de una confesional del *PAN*, éste debió aportar las cédulas de registro correspondientes o, en su caso, cualquier otro documento tendente a acreditar la libre y voluntaria afiliación de la denunciante de pertenecer como militante del partido denunciado.

En efecto, en el tema que nos ocupa, el medio de prueba directo y que de manera idónea demuestra si una persona está afiliada voluntariamente a un partido es la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político.

En el caso, si las ciudadanas referidas manifestaron que no dieron su consentimiento para pertenecer al partido político denunciado, implícitamente sostienen que no existe la constancia de afiliación atinente; por tanto, las quejas no estaban obligadas a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba tampoco son objeto de demostración los hechos negativos, salvo que envuelvan una afirmación.⁴¹

Esto es, en el tema que nos ocupa, conforme a lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada en el medio de impugnación SUP-RAP-141/2018,⁴² la carga probatoria corresponde a los partidos políticos, en el caso al *PAN*, ente político que *se encuentra obligado a demostrar que la solicitud de ingreso al partido fue voluntaria, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad o, en su caso, también tenía la posibilidad de probar sus afirmaciones a través de otros medios de prueba como lo serían documentales que justificaran la participación voluntaria de dichas personas en la vida interna del partido y con carácter de militante, como lo serían, por ejemplo, documentales que evidenciaran el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas, el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras*,⁴³ circunstancia que, en el particular no aconteció.

En el particular, el *PAN* era el sujeto que podía brindar algún elemento con el que se acreditara la información en cuestión en relación con la afiliación de las denunciantes, porque la *Sala Superior* ha establecido que los partidos políticos están en aptitud de contar con la prueba de afiliación de una persona, partiendo de

⁴¹ Criterio sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada el seis de junio de dos mil dieciocho, al resolver el medio de impugnación identificado con la clave SUP-RAP-141/2018.

⁴² Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_judicial/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0141-2018.pdf

⁴³ Criterio sostenido en la sentencia dictada en el medio de impugnación SUP-RAP-141/2018.

que se trata de documentación relacionada con otros deberes legales, como la observancia del porcentaje de integrantes para mantener su registro.⁴⁴

Así pues, el **PAN**, en los casos analizados, no demostró que la afiliación se realizó a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que dichas ciudadanas hayan dado su consentimiento para ser afiliadas, ni mucho menos que hayan permitido o entregado datos personales para ese fin, los cuales se estiman necesarios para procesar las afiliaciones, dado que estos elementos se constituyen como insumos obligados para, en su momento, llevar a cabo una afiliación, de ahí que esto sea necesario e inescindible.

En mérito de lo anterior, se deduce que existe evidencia que hace suponer que la afiliación a la que se refiere en este apartado, fue producto de una acción ilegal por parte del PAN.

Por lo anterior, este órgano colegiado considera pertinente declarar **fundado** el presente procedimiento, pues se concluye que el **PAN** infringió las disposiciones electorales tendentes a demostrar la libre afiliación de las ciudadanas **Celina Vite Sánchez** y **Alma Mireya Beltrán Núñez**, por no demostrar el acto volitivo de éstas para ser agremiadas a ese partido.

Es importante destacar que, si bien las denunciantes no dieron contestación a la vista para formular alegatos en el presente procedimiento, lo cierto es que tal cuestión es irrelevante porque obra en autos escrito de queja signados por ellas, en el que manifestaron su inconformidad de estar registradas en el padrón de militantes del **PAN**, sujeto que debió aportar la documentación que acreditara la debida afiliación de las quejas, lo cual no aconteció en el presente procedimiento.

Con base en ello, ante la negativa de las denunciantes de haberse afiliado al **PAN**, correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de pruebas idóneas, que la afiliación se llevó a cabo a través de los mecanismos legales para ello, en donde constara fehacientemente la libre voluntad de las hoy promoventes, lo que no hizo,

⁴⁴ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

siendo que el solo hecho de aparecer en su registro electrónico es insuficiente para acreditar el ejercicio libre, personal y voluntario del derecho de afiliación a dicho instituto político.

Es decir, no basta con que las quejas aparezcan que anteriormente estuvieron afiliadas al *PAN* en sus registros electrónicos, sino que dicho instituto político debió demostrar, con documentación soporte o pruebas idóneas, que dichas afiliaciones se realizaron de forma libre o voluntaria, o bien, que la aparición del nombre y datos de las quejas en su padrón de militantes, fue consecuencia de un error involuntario o de alguna circunstancia diversa, pero no lo hizo.

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación al *PAN* implica, además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que pudiera haber servido de base o justificación al partido político para afiliar a las ahora quejas.

Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales, tiene íntima vinculación con la indebida afiliación de las quejas sobre las que se declara fundado el presente procedimiento, lo cual ya quedó debidamente acreditado y, como consecuencia de ello, merece la imposición de la sanción que se determinará en el apartado correspondiente.

Cabe referir que a similar conclusión arribó este *Consejo General* en la resolución INE/CG120/2018, de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/ALC/CG/39/2017, así como en la resolución INE/CG448/2018, de once de mayo de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2017, las cuales fueron confirmadas por el *Tribunal Electoral* al dictar sentencia el veinticinco de abril y once de mayo de dos mil dieciocho, en los medios de impugnación con clave SUP-RAP-

047/2018⁴⁵ y SUP-RAP-137/2018,⁴⁶ respectivamente, derivado de una falta de la misma naturaleza a la que aquí se estudia, en donde se determinó que el uso de datos personales poseía un carácter intrínseco o elemento esencial para la configuración de una afiliación indebida.

CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de la falta denunciada, así como la responsabilidad del *PAN*, en los casos detallado en el considerando que antecede, procede ahora determinar la sanción correspondiente, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 355, párrafo 5 del *COFIPE*, cuyo contenido se reproduce en el diverso 458, párrafo 5, de la *LGIFE*, relativo a la gravedad de la responsabilidad en que se incurra; el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; y, en su caso, la reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.

En relación con ello, el *Tribunal Electoral* ha sostenido que para individualizar la sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción electoral.

1. Calificación de la falta

A) Tipo de infracción

Partido	Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
<i>PAN</i>	La infracción se cometió por una acción del	La conducta fue la afiliación	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41,

⁴⁵ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0047-2018.pdf

⁴⁶ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0137-2018.pdf

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMBN/JL/SIN/27/2018

Partido	Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
	partido político denunciado, que transgredió disposiciones de la <i>Constitución</i> y del <i>COFIPE</i> , la <i>LGIPE</i> y la <i>LGPP</i> , en el momento de su comisión.	indebida y el uso no autorizado de los datos personales de 2 (dos) ciudadanas.	Base I, párrafo segundo, de la <i>Constitución</i> ; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del <i>COFIPE</i> ; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la <i>LGIPE</i> ; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la <i>LGPP</i> .

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o prohibidas.

En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el caso concreto, se acreditó que el *PAN* incluyó indebidamente en su padrón de afiliados, a **dos** ciudadanas respecto de las que se acreditó la infracción, sin demostrar que para incorporarlas medió la voluntad de éstas de inscribirse como militantes de dicho instituto político, violentando con ello la norma electoral, en específico las disposiciones precisadas en el recuadro inserto en el subapartado previo.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de los ciudadanos mexicanos, de optar libremente por ser o no militante de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza

respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, efectivamente consintieron libremente en ser sus agremiados.

Por otra parte, como se analizó, para la indebida afiliación acreditada en el expediente que se resuelve se usaron los datos personales de las promoventes sin que éstas hubiesen otorgado su consentimiento para ello, lo cual, constituye un elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida.

En efecto, si bien es cierto, a partir de las constancias que obran en autos no está demostrado que los datos personales hubieran sido utilizados con un propósito diverso a la afiliación indebida en sí misma, o bien su difusión frente a terceros, lo es también que dicha información fue necesaria para materializar la incorporación de los datos del actor al padrón de militantes del partido político denunciado.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo argumentado en la sentencia de siete de junio de dos mil dieciocho dictada por la Sala Superior al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-141/2018,⁴⁷ en la que se estableció, en lo que interesa sobre el tema, lo siguiente:

“...los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de un ciudadano pertenecer a un partido político, no puede alegar que existe uso indebido de sus datos personales porque se consideran públicos.

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban pertenecer.”

De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción correspondiente al *PAN*.

⁴⁷ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0141-2018.pdf

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que el *PAN* transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la normativa interna del propio instituto político, y que, tal infracción se cometió en detrimento de los derechos de dos ciudadanas, esta situación no conlleva estar en presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de afiliación al instituto político denunciado, quien incluyó en su padrón de militantes a las hoy quejosas, sin demostrar el consentimiento previo para ello.

Cabe precisar, que en apartados subsecuentes se analizará a detalle el impacto que tuvo dicha infracción, en atención al número de personas afiliadas indebidamente.

D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

- a) Modo.** En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles al *PAN* consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, fracción I de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*, al incluir en su padrón de afiliados a las quejosas, sin tener la documentación soporte que acredite fehacientemente la voluntad de éstas de pertenecer a las filas de dicho instituto político en el cual se encontraron incluidas, tal y como se advirtió a lo largo de la presente Resolución de forma pormenorizada.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMBN/JL/SIN/27/2018

b) Tiempo. En el caso concreto, como se razonó en el considerando que antecede, por cuanto hace a las afiliaciones sin el consentimiento previo de las ciudadanas, aconteció como se muestra en las siguientes tablas:

N°	Nombre de la quejosa	Fecha de afiliación proporcionada por la <i>DEPPP</i>	Afiliada
1	Celina Vite Sánchez	13/12/2013	Si

N°	Nombre de la quejosa	Fecha de afiliación proporcionada por el <i>PAN</i>	Afiliada
2	Alma Mireya Beltrán Núñez	Fecha de alta: Sin dato proporcionado por el partido. Fecha de baja: 15/11/2017	Si

Sobre el caso de **Alma Mireya Beltrán Núñez** es importante destacar que de las constancias que integran el presente expediente, no se advierte la fecha de afiliación al *PAN* y, tomando en consideración que la única certeza que tiene esta autoridad, es la fecha de cancelación de su registro como afiliada a dicho instituto político, se considera prudente tomar como fecha de referencia el quince de noviembre de dos mil diecisiete.

Lo anterior, toda vez que el partido político se limitó a señalar que el estatus del registro de afiliación de Alma Mireya Beltrán Núñez se encontraba cancelado con fecha quince de noviembre de dos mil diecisiete; y que la *DEPPP* informó que no se encontró coincidencia alguna en el registro de afiliados del partido político denunciado.

Ante dicha situación, con la finalidad de dotar de objetividad y certeza a la presente determinación y toda vez que la única certeza que se tiene respecto a esta cuestión es precisamente la fecha de cancelación de registro de afiliados, se tomará dicha fecha para efectos de la presente Resolución.

A similar conclusión se llegó en el criterio emitido por la *Sala Superior* al dictar sentencia el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho en el expediente SUP-RAP-18/2018.⁴⁸

- c) **Lugar.** Con base en las razones plasmadas en los escritos de denuncia, se deduce que las faltas atribuidas al *PAN* se cometieron de la siguiente manera:

N°	Nombre de la quejosa	Entidad
1	Celina Vite Sánchez	Estado de México
2	Alma Mireya Beltrán Núñez	Sinaloa

E) Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Se considera que en el caso existe una conducta **dolosa** por parte del *PAN*, en violación a lo previsto en los artículos ya establecidos en los párrafos anteriores.

La falta se califica como **dolosa**, por lo siguiente:

- El *PAN* es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus constitucional de **entidad de interés público**, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la *Constitución*; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- El *PAN* está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado

⁴⁸ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0018-2018.pdf

democrático, respetando los derechos de los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 38, párrafo 1, inciso a), del *COFIPE*.

- El de libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.
- Todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.
- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e) del *COFIPE*.
- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una

controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria.**

- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, es una violación de orden constitucional y legal que **requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento.**

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta se considera dolosa, porque:

- 1) Las quejas aducen que no solicitaron en momento alguno su registro o incorporación como militante al *PAN*.
- 2) Quedó acreditado que las quejas fueron registradas en el padrón de militantes del *PAN*.
- 3) El partido político denunciado no demostró que la afiliación de las quejas se hubiera realizado a través de los mecanismos legales y partidarios conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y voluntaria de las denunciantes.
- 4) El *PAN* no demostró ni probó que la afiliación de las quejas fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos

razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun indiciaria, para estimar que la afiliación de las quejas fue debida y apegada a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.

F) Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el *PAN*, se cometió al afiliar indebidamente a **dos (2)** ciudadanas, sin demostrar el acto volitivo de éstas tanto de ingresar en su padrón de militantes como de haber proporcionado sus datos personales para ese fin.

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en garantizar el derecho de libre afiliación y la protección de los datos personales de los ciudadanos mexicanos, mediante la conservación de los documentos atinentes que permitan demostrar el acto de voluntad de la ciudadana quejosa de militar en el partido político denunciado, ni para el uso de sus datos personales.

2. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A. Reincidencia

Por cuanto a la **reincidencia** en que pudo haber incurrido el *PAN*, este organismo electoral autónomo considera que **no se actualiza**.

De conformidad con el artículo 355 párrafo 6 del *COFIPE*, cuyo contenido reproduce el diverso 458, párrafo 6 de la *LGIPE*, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el mencionado *Código*, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, la *Sala Superior* ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);
2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
3. Que en ejercicios anteriores el infractor **haya sido sancionado por esa infracción mediante Resolución o sentencia firme.**

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el *Tribunal Electoral*, a través de la Tesis de Jurisprudencia 41/2010, cuyo rubro es: **REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.**⁴⁹

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con anterioridad.

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta.

En este sentido, debe precisarse que, en el presente asunto, no puede considerarse actualizado dicho supuesto por cuanto hace al *PAN*, pues en los archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya sancionado a ese ente político por faltas como la que se sanciona por esta vía, que se hayan dictado con anterioridad a los hechos materia de las presentes denuncias.

⁴⁹ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010>

B. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares del caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de las ciudadanas al partido político denunciado, pues se comprobó que el *PAN* afilió a las quejas, sin demostrar contar con la documentación que acredite que medió la voluntad de sus agremiadas de pertenecer o estar inscritas a dicho instituto político.
- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, de optar por ser o no militante de algún partido político, y la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.

- Para materializar la indebida afiliación de las denunciantes, se utilizaron indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para formar el padrón de afiliados del *PAN*.
- No existió un beneficio por parte del *PAN*, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral.
- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso Electoral.
- No existe reincidencia por parte del *PAN*.

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente **calificar la falta** en que incurrió el *PAN* como de **gravedad ordinaria**, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el partido político denunciado dolosamente infringió el derecho de libre afiliación de las hoy quejosas, lo que constituye una violación a un derecho fundamental de los ciudadanos, reconocido en la *Constitución*.

Al respecto, es importante precisar que para efectos de determinar el monto de la sanción a imponer se debe diferenciar, **como en el caso acontece, si se está ante una indebida afiliación** o una violación al derecho de libre afiliación en su vertiente de no permitirle al quejoso ser desafiliado.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo resuelto por la *Sala Superior* al dictar sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-141/2018, en la que determinó, esencialmente, lo siguiente:

“Finalmente, para efectos de la sanción a imponer, consideró oportuno diferenciar entre aquellos ciudadanos de los que se utilizaron indebidamente sus datos personales para

afiliarlos sin su consentimiento al partido denunciado (once ciudadanos) y aquélla que denunció la presunta indebida afiliación en su vertiente de falta de atención al derecho de desafiliación, puesto que, si bien en ambos casos estamos ante la presencia de una falta grave ordinaria, lo cierto es que en el primero de los supuestos hubieron hechos afirmativos tendentes a menoscabar el derecho de libre afiliación, utilizando datos personales de los afectados y en el segundo, se trata de una omisión, lo cual conlleva que la sanción imponer en cada supuesto sea diferenciada.

Por tal motivo, en el caso concreto, se estima que la motivación expuesta por el Instituto Nacional Electoral fue suficiente para justificar la individualización de la sanción.”

C. Sanción a imponer

Ahora bien, la mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción.

Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor cuantía⁵⁰.

El artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIPE*, dispone el catálogo de sanciones a imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México; reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita; y en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la *Constitución* y de la *LGIPE*, con la cancelación de su registro como partido político.

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción (especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción

⁵⁰ Véase la tesis XXVIII/2003 de la Sala Superior, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.

acreditada), así como la conducta realizada por el *PAN* en el caso concreto, se determina que debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida.

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la *LGIPE*, confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que, a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realicen una falta similar.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que ni el *COFIPE* ni la *LGIPE* determinan pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo establece las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

Con base en lo anterior, este *Consejo General* estima que, derivado de las circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida al *PAN*, justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido se replica con el diverso 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGIPE*, consistente en una **MULTA**, toda vez que se considera que

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMBN/JL/SIN/27/2018

tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto.

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la sanción a imponer.

En este orden de ideas, es pertinente hacer notar, que ha sido criterio de esta autoridad, en la resolución INE/CG120/2018, de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/ALC/CG/39/2017, así como en la resolución INE/CG448/2018, de once de mayo de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2017, las cuales fueron confirmadas por el *Tribunal Electoral* al dictar sentencia el veinticinco de abril y once de mayo de dos mil dieciocho, en los medios de impugnación con clave SUP-RAP-047/2018⁵¹ y SUP-RAP-137/2018,⁵² respectivamente, en los que se sancionó por una indebida afiliación de un ciudadano, en cada caso, con una multa equivalente a 642 (seiscientos cuarenta y dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento de la comisión de la conducta, sanción

⁵¹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0047-2018.pdf

⁵² Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0137-2018.pdf

que se estima debe tomarse como base para el presente asunto, si se considera que en dichos asuntos se demostró la comisión de una infracción similar a la que acontece en el caso que aquí se resuelve.

En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta causa, en específico que no se refiere a la interposición de una sola queja, sino de una multiplicidad de quejas y afiliaciones indebidas, las cuales han quedado acreditadas en autos, es claro que la individualización de la sanción aplicada con motivo de la afiliación indebida de las ciudadanas al *PAN*, debe resultar proporcional sin perder de vista las condiciones socioeconómicas del instituto político denunciado, y no simplemente, los hechos denunciados y acreditados en el presente procedimiento, a fin de que la sanción que se imponga resulte efectivamente proporcional sin ser excesiva.

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad debe determinar su monto o cuantía, **tomando en cuenta** las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que corresponda.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión

que tiene sustento en la Tesis relevante **XXVIII/2003**,⁵³ emitida por el *Tribunal Electoral*, misma que a letra establece:

“SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.- En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.”

Ahora bien, a juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con base en lo dispuesto en la fracción II del numeral citado, lo procedente es imponer al *PAN* sendas **multas, respecto de las dos ciudadanas que se acreditó fueron afiliadas indebidamente** y que aparecen en su padrón de afiliados, conforme a lo siguiente:

- **Celina Vite Sánchez**

642 (seiscientos cuarenta y dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento de la comisión de la conducta (2013)

- **Alma Mireya Beltrán Núñez**

642 (seiscientos cuarenta y dos) Unidades de Medida y Actualización, al momento de la comisión de la conducta (2017).

⁵³ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMBN/JL/SIN/27/2018

Al respecto, es un hecho notorio que se invoca en términos de lo establecido en el artículo 358 del *COFIPE*, cuyo contenido se replica en el diverso 461 de la *LGIFE*, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fija anualmente los montos respectivos, mismos que deben ser relacionados con las fechas de afiliación, para obtener la sanción que corresponde por cuanto a cada una de las ciudadanas indebidamente afiliadas, arrojan lo siguiente:

PAN		
Total de quejas	Salario mínimo/UMA	Monto en pesos
Afiliación en 2013		
1	\$64.76	\$41,575.92
Afiliación en 2017		
1	Unidad de Medida y Actualización \$75.49	\$48,464.58
TOTAL		\$90,040.50 <small>[Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].</small>

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, pues sin ser gravosa, sí puede inhibir al *PAN* para que en el futuro vigile el cumplimiento de las normas de la materia.

Ahora bien, es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la *Constitución* —efectuado por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones.

En esas condiciones, lo procedente es transformar la sanción que se considera idónea, expresada en salarios mínimos, a Unidades de Medida y Actualización, para lo cual es necesario dividir el monto inicial (seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México multiplicado por el salario mínimo vigente en el año dos mil trece), entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, misma que equivale, para el ejercicio fiscal en curso, a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M. N.).

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMBN/JL/SIN/27/2018

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 10/2018,⁵⁴ del *Tribunal Electoral*, de rubro y contenido siguiente:

“MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.- De la interpretación sistemática de los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transitorios segundo y tercero del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como 44, párrafo primero, inciso aa), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando en consideración el principio de legalidad que rige en los procedimientos sancionadores, se advierte que el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del ilícito.”

De esta manera, al aplicar la fórmula mencionada, respecto de las ciudadanas que fueron afiliadas indebidamente por el *PAN*, se obtiene lo siguiente:

Salario mínimo vigente	El SMGV se multiplica por 642 días de SMGV o UMA en el año	La cifra obtenida de la multiplicación anterior, se divide entre la Unidad de Medida y Actualización vigente de \$80.60	La cifra obtenida de la operación anterior se multiplica por el número de ciudadanos	Sanción a imponer en Unidad de Medida y Actualización
Afiliación en 2013				
\$64.76	642	515.83	1	515.83
Afiliación en 2017				
\$75.49	642	642	1	642

La cifra de 515.83 (quinientos quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal equivale a \$41,575.89 (cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 89/100 M.N.) [Monto calculado al segundo decimal, salvo error aritmético].

A la cifra anterior, debemos sumar el monto correspondiente a la ciudadana que fue afiliada en 2017, sobre la cual se debe imponer la multa al *PAN*, de manera directa con la Unidad de Medida y Actualización vigente en ese año, siendo esta de \$75.49

⁵⁴ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=Jurisprudencia,10/2018>

(setenta y cinco pesos 49/100 M.N.), lo que corresponde a 642 unidades, equivalente a **\$48,464.58 (cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 58/100 M.N.)** [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].

Así, de la suma de las cantidades de **\$41,575.89** (cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 89/100 M.N.) y **\$48,464.58** (cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 58/100 M.N.), se obtiene la cifra final siguiente:

- **\$90,040.47** (noventa mil cuarenta pesos 47/100 M.N.).

Debe precisarse que se considera que la multa impuesta al *PAN* constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, ya que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, se concluye que la misma resulta eficaz y proporcional.

D. El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la infracción

Se estima que la infracción cometida por parte del *PAN*, aun cuando causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de la infracción.

E. Las condiciones socioeconómicas del infractor

Sobre este punto, es preciso señalar que conforme al Acuerdo INE/CG339/2017, emitido por este *Consejo General* el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se estableció que, entre otros, el *PAN* recibiría mensualmente en el presente ejercicio, por concepto de financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes, la siguiente cantidad:

SUJETO	Monto del financiamiento público para el sostenimiento de Actividades Ordinarias del mes de septiembre 2018
PAN	\$68'993,261.00

Ahora bien, según fue informado por la *DEPPP*, a través del oficio **INE/DEPPP/DE/DPPF/5693/2018**, el monto de la ministración mensual correspondiente a septiembre de dos mil dieciocho, debía ser ajustado en función de las sanciones administrativas pendientes de cubrir por dicho instituto político nacional, por lo cual la cifra total a recibir sería la siguiente:

SUJETO	IMPORTE DE LA MINISTRACIÓN DE SEPTIEMBRE DE 2018	IMPORTE TOTAL DE LA SANCIÓN SEPTIEMBRE 2018	IMPORTE NETO DE LA MINISTRACIÓN
PAN	\$68'993,261.00	\$180,672.00	\$68,812,589.00

F. Impacto en las actividades del sujeto infractor

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta al *PAN*, no es de carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida, respecto al monto del financiamiento que recibirá por concepto de actividades ordinarias permanentes en el mes de septiembre del año en curso, es el siguiente porcentaje:

Partido político	Año	Monto de la sanción por ciudadana. ⁵⁵	Ciudadanas indebidamente afiliados	% de la ministración mensual por ciudadana
<i>PAN</i>	2013	\$41,575.89	1	0.06%
	2017	\$48,464.58	1	0.07%

Por consiguiente, la sanción impuesta al *PAN* no es de carácter gravoso, si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual correspondiente al mes de septiembre de este año.

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y

⁵⁵ Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.

subjetivos de la infracción cometida por el *PAN* (especialmente los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con el financiamiento que recibe del *INE* para el mes de septiembre de dos mil dieciocho, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político sancionado.

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el partido político de mérito —tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagar sin que ello afecte sus operaciones ordinarias, además de que las sanciones son proporcionales a las faltas cometidas y se estima que, sin resultar excesivas ni ruinosas, pueden generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la *Sala Superior* en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-250/2009⁵⁶, es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

QUINTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE LAS QUEJOSAS COMO MILITANTES. En tal sentido, se tiene que la voluntad de las denunciantes es no pertenecer al *PAN*, por lo que se debe vincular al partido político, para que, de ser el caso, en el supuesto que las quejas continúen en su padrón de militantes, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentaron su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, los medios de prueba que amparen el cumplimiento.

⁵⁶ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm>

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017,⁵⁷ de cinco de enero de dos mil diecisiete, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el *INE*, que lo vincule con un instituto político en particular.

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la *Constitución*,⁵⁸ se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previsto en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la *Ley de Medios*.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara **fundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra del *PAN*, al infringir las disposiciones electorales de libre afiliación de **Celina Vite Sánchez y Alma Mireya Beltrán Núñez**, en términos de lo establecido en el numeral 5, del Considerando **TERCERO** de esta Resolución.

⁵⁷ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/JDC/2/SUP_2017_JDC_2-626321.pdf

⁵⁸ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.**”

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/AMBN/JL/SIN/27/2018

SEGUNDO. En términos del Considerando **CUARTO** de la presente Resolución, se impone al **PAN**, **una multa por la indebida afiliación de cada una de las dos ciudadanas**, conforme a los montos que se indican a continuación:

Ciudadana	Importe de la multa
Celina Vite Sánchez	515.83 (Quinientas quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalentes a \$41,575.89 (Cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 89/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2013]
Alma Mireya Beltrán Núñez	642 (seiscientos cuarenta y dos) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$48,464.58 (Cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 58/100 M. N.) [2017]

TERCERO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7 de la *LGPE*, el monto de las multas impuestas al **PAN**, será deducido, según corresponda, de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su Considerando **CUARTO**.

CUARTO. Se vincula al **PAN** para que, de ser el caso, en el supuesto que las quejas continúen en su padrón de militantes, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentó su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, los medios de prueba que amparen el cumplimiento, conforme a lo dispuesto en su Considerando **QUINTO**.

QUINTO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42 de la *Ley de Medios*, así como a través del juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previsto en el artículo 79 del referido ordenamiento legal, para el caso de las denunciantes.

Notifíquese personalmente, a Alma Mireya Beltrán Núñez y Celina Vite Sánchez; **por oficio**, al **PAN**, por conducto de su representante ante este *Consejo General*; y **por estrados** a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1243/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ORDINARIO
EXPEDIENTE:
UT/SCG/Q/NAJS/JD01/ZAC/92/2018
DENUNCIANTE: NORMA ARACELI JIMÉNEZ
SÁNCHEZ Y OTRO.
DENUNCIADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/NAJS/JD01/ZAC/92/2018, INICIADO CON MOTIVO DE LAS QUEJAS PRESENTADAS POR NORMA ARACELI JIMÉNEZ SÁNCHEZ Y JULIO ADRIÁN LARA ESTRADA, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, ATRIBUIBLES AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CONSISTENTES EN LA PRESUNTA AFILIACIÓN INDEBIDA DE LOS MENCIONADOS CIUDADANOS AL PARTIDO POLÍTICO EN CITA, SIN QUE HUBIERE MEDIADO CONSENTIMIENTO ALGUNO

Ciudad de México, 12 de septiembre de dos mil dieciocho.

GLOSARIO	
COFIPE	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Comisión de Quejas	Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral

GLOSARIO	
DEPPP	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
DERFE	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
INE	Instituto Nacional Electoral
LGIPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
LGPP	Ley General de Partidos Políticos
LGSMI	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
PRI	Partido Revolucionario Institucional
Reglamento de Quejas	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
Sala Superior	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Tribunal Electoral	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

A N T E C E D E N T E S

I. PRESENTACIÓN DE LAS DENUNCIAS.¹ En dieciséis y veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se recibieron en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral escritos de queja signados por Norma Araceli Jiménez Sánchez y Julio Adrián Lara Estrada, a través de los cuales hicieron del conocimiento de esta autoridad electoral, hechos que contravienen la normatividad electoral, consistentes en la violación del derecho de libertad de afiliación y la indebida utilización de sus datos personales.

No.	Nombre del quejoso	Oficio	Fecha	Entidad Federativa
1	NORMA ARACELI JIMÉNEZ SÁNCHEZ	INE/JDE01-ZAC/0350/2017	16/03/2018	ZACATECAS

¹ Visible a fojas 01 a 08 y 19 a 25 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/NAJS/JD01/ZAC/92/2018

No.	Nombre del quejoso	Oficio	Fecha	Entidad Federativa
2	JULIO ADRIÁN LARA ESTRADA	INE/JAL/JDE15/331/2018	23/03/2018	JALISCO

REGISTRO, ADMISIÓN DE LAS DENUNCIAS Y REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN.² Mediante acuerdo de cinco de abril de dos mil dieciocho, emitido por el Titular de la *UTCE*, se ordenó formar el expediente respectivo, el cual quedó registrado bajo la clave UT/SCG/Q/NAJS/JD01/ZAC/92/2018, e iniciar el trámite del presente procedimiento sancionador ordinario, ordenando la reserva del emplazamiento, hasta en tanto se contara con los elementos necesarios para pronunciarse al respecto.

Con el propósito de constatar los hechos materia de inconformidad y allegarse de los elementos y constancias necesarios para la debida sustanciación del procedimiento, en las fechas que se indican, se acordaron las siguientes diligencias:

Sujeto requerido	Diligencia	Oficio y fecha de notificación	Observaciones
PRI	<p>Se le requirió informará lo siguiente:</p> <p>a) Si actualmente dentro de su Padrón de Afiliados se encuentran registrados los ciudadanos antes mencionados; para tal efecto se ordena anexar al presente requerimiento, en sobre cerrado, copia simple y legible de la credencial para votar de los ciudadanos en cuestión.</p> <p>b) De ser afirmativa su respuesta, informe la fecha de alta en el referido padrón y remita el original o copia certificada de los expedientes en que obren las constancias de afiliación correspondientes donde conste la manifestación de voluntad</p>	<p>INE- UT/4194/2018³</p> <p>06/abril/2018</p>	<p>Respuesta</p> <p>PRI/REP- INE/279/2018⁴</p> <p>11/abril/2018</p>

² Visible a fojas 26 a 33 del expediente.

³ Visible a foja 40 del expediente.

⁴ Visible a foja 47 a 51 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/NAJS/JD01/ZAC/92/2018

Sujeto requerido	Diligencia	Oficio y fecha de notificación	Observaciones
	de los ciudadanos para ser afiliados a dicho partido político. c) De ser negativa su respuesta, indique si anteriormente los ciudadanos fueron afiliados y la fecha de su baja en el referido padrón, y remita el original o copia certificada de los expedientes en que obren las constancias de los procedimientos de desafiliación correspondientes.		
DEPPP	Informará si los ciudadanos denunciados se encuentran registrados en el padrón de afiliados del Partido Revolucionario Institucional. En su caso, indicando la fecha a partir de la cual se les dio de alta en dicho padrón y remitiera los originales o copia certificada de los expedientes donde obraran las constancias de afiliación respectivas.	INE- UT/4193/2018 ⁵ 06/abril/2018	Respuesta DEPPP- 20184165 ⁶ 10/abril/2018

II. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.⁷ En atención a que el *PRI* dio cumplimiento parcial al requerimiento que le fue realizado por la autoridad sustanciadora el cinco de abril de dos mil dieciocho, proporcionando únicamente la información concerniente a Norma Araceli Jiménez Sánchez, mediante Acuerdo de dieciséis de mayo del año en curso, se solicitó a dicho ente partidista, de nueva cuenta, remitiera a la *UTCE*, los datos respecto de Julio Adrián Lara Estrada.

IV. EMPLAZAMIENTO⁸. El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, se ordenó el emplazamiento al *PRI*, para el efecto de que manifestara lo que a su derecho

⁵ Visible a foja 39 del expediente.

⁶ Visible a fojas 44 a 45 del expediente.

⁷ Visible a fojas 62 a 66 del expediente.

⁸ Visible a fojas 78 a 85 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/NAJS/JD01/ZAC/92/2018

conviniera respecto a las conductas que se le imputó y aportara los medios de prueba que consideraran pertinentes.

Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito.

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
INE-UT/8278/2018 ⁹ 04/junio/2018	Citatorio: ¹⁰ 01 de junio de 2018. Cédula: ¹¹ 04 de junio de 2018. Plazo: 05 al 12 de junio de 2018.	Oficio PRI/REP-INE/0451/2018 signado por el representante del <i>PRI</i> ante el <i>Consejo General</i> , presentado el 11 de junio de 2018 ¹²

V. ALEGATOS.¹³ Mediante acuerdo de seis de julio de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a las partes, a efecto de que en vía de alegatos manifestaran lo que a su derecho conviniera.

El acuerdo de vista para alegatos, se diligenció en los siguientes términos:

Denunciado

Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
<i>PRI</i> INE-UT/11299/2018 ¹⁴ 10/julio/2018	Cédula: 10/julio/2018 ¹⁵ Citatorio: 09/julio/2018 ¹⁶ Plazo: 11 al 18 de julio de 2018.	Oficio PRI/REP/INE/0534/2018 signado por el representante del <i>PRI</i> ante el <i>Consejo General</i> , presentado el 18/julio/2018 de 2018. ¹⁷

⁹ Visible a foja 92 del expediente.

¹⁰ Visible a fojas 93 a 100 del expediente.

¹¹ Visible a fojas 101 a 102 del expediente.

¹² Visible a fojas 107 a 109 del expediente.

¹³ Visible a fojas 110 a 114 del expediente.

¹⁴ Visible a foja 119 del expediente.

¹⁵ Visible a fojas 125 a 126 del expediente.

¹⁶ Visible a fojas 120 a 124 del expediente.

¹⁷ Visible a fojas 130 a 132 del expediente.

Denunciantes

No.	Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
1	Norma Araceli Jiménez Sánchez. INE/JDE01-ZAC/1609/2018 ¹⁸ 10/julio/2018	Citatorio: 10/julio/2018 ¹⁹ Cédula: 10/julio/2018 ²⁰ Plazo: 11 al 17 de julio de 2018.	No dio respuesta
2	Julio Adrián Lara Estrada. INE/JAL/JDE15/VE/744/2018 ²¹ 10/julio/2018	Cédula: 10/julio/2018 ²² Plazo: 11 al 17 de julio de 2018.	No dio respuesta

VI. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. En su oportunidad, toda vez que no había diligencias pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la Comisión.

VII. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS. En la Octogésima Cuarta Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el seis de septiembre de dos mil dieciocho, la Comisión de Quejas y Denuncias del *INE* analizó el Proyecto de Resolución del procedimiento sancionador ordinario al rubro identificado, en la cual determinó aprobarlo por unanimidad de votos de sus integrantes.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERO. COMPETENCIA

¹⁸ Visible a foja 142 del expediente.

¹⁹ Visible a fojas 144 a 145 del expediente.

²⁰ Visible a foja 146 del expediente.

²¹ Visible a foja 134 del expediente.

²² Visible a fojas 136 a 137 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/NAJS/JD01/ZAC/92/2018

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión de Quejas*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte del *PRI*, en perjuicio de los ciudadanos que han sido señalados a lo largo de la presente determinación.

Ahora bien, conforme al artículo 23 del *COFIPE*, los partidos políticos ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en el citado Código, correspondiendo al Instituto Federal Electoral —hoy INE— vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n); y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho Código, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38 del dispositivo legal en cita, las cuales son sancionables por el *Consejo General*.

Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443, párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la *LGIPE* y 25 de la *LGPP*, respectivamente.

En consecuencia, siendo atribución del *Consejo General* conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta competente para conocer y resolver respecto de las presuntas infracciones denunciadas en el procedimiento sancionador ordinario, atribuidas al *PRI* derivado, esencialmente, de las indebidas afiliaciones al citado instituto político.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,²³ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de ciudadanos.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIPE* —los cuales contienen reglas que ya se encontraban previstas en el *COFIPE*, en los artículos 342, párrafo 1, incisos a); 356, 361, 364, 365 y 366—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO.

En el procedimiento en que se actúa, las presuntas faltas (indebida afiliación), en ambos casos, se cometieron durante la vigencia del *COFIPE*, puesto que el registro o afiliación de los quejosos al *PRI* se realizó antes del veinticuatro de mayo de dos mil catorce, fecha en la cual entró en vigor la *LGIPE*.

²³ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

En efecto, de conformidad con lo establecido en el Punto cuarto de *los Lineamientos para la Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su registro*, aprobados por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG617/2012, de treinta de agosto de dos mil doce, los Partidos Políticos Nacionales debían capturar en el *Sistema de Cómputo desarrollado por la Unidad Técnica de Servicios de Informática*, los datos de todos sus afiliados en el periodo comprendido **entre el uno de abril de dos mil trece y el treinta y uno de marzo de dos mil catorce**.

Por tanto, si al momento de la comisión de las presuntas faltas se encontraba vigente el COFIPE, es este el ordenamiento legal que debe aplicarse para las cuestiones sustantivas del presente procedimiento, al margen que las faltas pudieran haber sido advertidas por los quejosos y cuestionadas mediante las quejas que dieron origen al presente asunto, una vez que dicha norma fue abrogada por la LGIPE, así como que este último ordenamiento sea fundamento para cuestiones procesales o adjetivas.

Sin perjuicio de que, en lo conducente, puedan aplicarse los plazos precisados en los transitorios correspondientes del referido Decreto, así como las reglas procesales contenidas en la *LGIPE*,²⁴ y en el *reglamento*.

Lo anterior, en consonancia con lo establecido en la tesis de jurisprudencia de rubro **RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES**.²⁵

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO

1. LITIS

²⁴ Al respecto, véase la **Jurisprudencia** del Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es: **RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES, NO EXISTE POR REGLA GENERAL.**, Novena Época, Tribunales colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Julio de 1998, materia Penal, tesis VI.2°, J/140, Página 308. Asimismo, también la **Jurisprudencia** de rubro: **RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES**, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Abril de 1997, material Civil, tesis I.8° C. J/1, Página 178. Finalmente, la **Jurisprudencia** de rubro **DERECHOS PROCESALES ADQUIRIDOS. CONCEPTO DE, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LA LEY**, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo V. Civil Segunda Parte-TCC Primera Sección-Civil Subsección 2-Adjetivo, materia Civil, tesis 1048, página 1172.

²⁵ Consulta disponible en la dirección electrónica: <http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/1012/1012265.pdf>

En el presente asunto se deberá determinar si el *PRI* afilió indebidamente o no a los ciudadanos que alegan no haber dado su consentimiento para estar en sus filas, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u), de la *LGPP*.

2. MARCO NORMATIVO

A) Constitución, tratados internacionales y ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: ...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios

que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

...

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la *Constitución Federal*, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33, de la *Constitución*.

Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafilarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de

la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 24/2002 emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES**.²⁶

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación* de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,²⁷ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación* de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

²⁶ Consultable en la página: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

²⁷ Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes —asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años,

estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

***Artículo 23.** Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:*

I...

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;
- Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
- Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGPE*, que es obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *H. Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su constitución y registro.

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.

- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para

la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la *Constitución* y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular,

hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna del *PRI*

Estatutos del PRI

De la Integración del Partido

Artículo 22. *El Partido Revolucionario Institucional está integrado por ciudadanos mexicanos, hombres y mujeres, que se afilien individual y libremente y suscriban los Documentos Básicos del Partido. Los integrantes individuales del Partido podrán incorporarse libremente a las organizaciones de los sectores, organizaciones nacionales y adherentes.*

Sección 1. De las personas afiliadas.

Artículo 23. *El Partido establece entre sus integrantes las siguientes categorías, conforme a las actividades y las responsabilidades que desarrollen:*

I. Miembros, a las personas ciudadanas, hombres y mujeres, en pleno goce de sus derechos políticos, afiliados al Partido;

II. Militantes, a las y los afiliados que desempeñen en forma sistemática y reglamentada las obligaciones partidarias;

III. Cuadros, a quienes con motivo de su militancia:

a) Hayan desempeñado cargos de dirigencia en el Partido, sus sectores, organizaciones nacionales y adherentes.

b) Hayan sido candidatas o candidatos del Partido, propietarias o propietarios y suplentes, a cargos de elección popular.

c) Sean o hayan asumido la representación del Partido o de sus candidatas o candidatos ante los órganos electorales, casillas federales, de la entidad federativa, distritales, municipales o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/NAJS/JD01/ZAC/92/2018

d) Hayan egresado de las instituciones de capacitación política del Partido, o de los centros especializados de los sectores, organizaciones nacionales y adherentes, y desempeñado comisiones partidistas.

e) Desempeñen o hayan desempeñado un cargo de responsabilidad política, dentro de los diferentes órganos de dirección del Partido o en sus organizaciones en los diversos niveles de su estructura.

f) Participen de manera formal y regular durante las campañas electorales de las candidatas y los candidatos postulados por el Partido.

g) Quienes hayan participado en asambleas y convenciones del Partido; o

h) Las y los directivos de las fundaciones y de los organismos especializados y sus antecedentes; y

IV. Dirigentes, a los integrantes:

a) De los órganos de dirección deliberativos, previstos en las fracciones I, II, III, VII y VIII del artículo 66;

b) De los órganos de dirección ejecutivos, previstos en las fracciones IV y XI del artículo 66;

c) De los órganos de defensoría y jurisdiccionales, previstos en las fracciones V, VI, IX y X del artículo 66; y

d) De los órganos de representación territorial previstos en la fracción XII del artículo 66 y el párrafo segundo del artículo 55. El Partido registrará ante las autoridades competentes a las y los integrantes de los órganos de dirección ejecutivos. El Partido asegurará la igualdad de derechos y obligaciones entre sus integrantes, con las excepciones y limitaciones que impongan las leyes en cuanto al ejercicio de derechos políticos y las salvedades que establecen los presentes Estatutos y el Código de Ética Partidaria. Las relaciones de las personas afiliadas entre sí se regirán por los principios de igualdad de derechos y obligaciones que les correspondan, así como por los principios de la ética partidaria.

Artículo 24. *Independientemente de las categorías a que hace referencia el artículo anterior, el Partido reconoce como simpatizantes a las personas ciudadanas no afiliadas que se interesan y participan en sus programas y actividades. Las y los simpatizantes tendrán los siguientes derechos:*

I. Solicitar su afiliación como miembros del Partido;

II. Participar de los beneficios sociales, culturales y recreativos derivados de los programas del Partido;

III. Ejercer su derecho a voto, por las y los candidatos o dirigentes del Partido, cuando las convocatorias respectivas así lo consideren;

y IV. Aquéllos que le reconozcan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados de derechos humanos de los que sea parte el Estado mexicano.

[...]

Capítulo V De los Mecanismos de Afiliación

Artículo 54. *Podrán afiliarse al Partido Revolucionario Institucional los ciudadanos mexicanos, hombres y mujeres, que personal, pacífica, libre e individualmente, y en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Legislación Electoral vigente y estos Estatutos, expresen su voluntad de integrarse al Partido, comprometiéndose con su ideología y haciendo suyos los Documentos Básicos.*

Artículo 55. *La afiliación al Partido se hará ante la sección en cuya demarcación se encuentre el domicilio del solicitante o ante el comité municipal o delegacional, estatal o nacional correspondiente o en los módulos itinerantes o temporales establecidos para tal fin, así como en Internet, quienes notificarán al órgano partidista superior para que se incluya en el Registro Partidario, refiriendo al afiliado al seccional de su domicilio, como ámbito para el desarrollo de sus actividades políticas y electorales.*

Una vez afiliado, el Partido otorgará al ciudadano la credencial y documento que acredite su calidad de miembro. En tratándose de reafiliación de aquéllos que hayan salido del Partido en forma voluntaria o de afiliación al mismo de quien provenga de otro partido político, la Comisión de Justicia Partidaria que corresponda deberá hacer la declaratoria respectiva una vez que el interesado acredite haber cumplido con el proceso de capacitación ideológica.

La dirigencia del Partido, en todos sus niveles, mantendrá programas permanentes de afiliación y credencialización.

Artículo 56. *Podrán afiliarse al Partido Revolucionario Institucional los hombres y las mujeres con ciudadanía mexicana, que personal, pacífica, libre e individualmente, y en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Legislación Electoral vigente y estos Estatutos, expresen su voluntad de integrarse al Partido, comprometiéndose con su ideología y haciendo suyos los Documentos Básicos.*

Artículo 57. *La persona que desee afiliarse al Partido podrá hacerlo ante el Comité Seccional, el Comité Municipal o el Comité de la demarcación territorial en el caso de la Ciudad de México, que correspondan a su domicilio. También podrá hacerlo ante el*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/NAJS/JD01/ZAC/92/2018

Comité Directivo de la entidad federativa donde resida, o ante el Comité Ejecutivo Nacional. De igual forma podrá afiliarse en los módulos itinerantes o temporales que se establezcan. La instancia del Partido que reciba la afiliación lo notificará al órgano superior competente para la inclusión del nuevo miembro en el Registro Partidario y, en su caso, referirá a la afiliada o el afiliado al Comité Seccional de su domicilio, como ámbito para el desarrollo de sus actividades políticas y electorales.

El Partido establecerá el servicio de reafiliación en su página electrónica, que el solicitante deberá completar en cualquiera de los Comités referidos en el párrafo anterior.

Una vez cumplido lo anterior, el Partido otorgará la credencial y documento que acredite su afiliación.

Tratándose de la reafiliación de quienes hayan salido del Partido en forma voluntaria o de afiliación al mismo de quien provenga de otro partido político, se seguirá el procedimiento previsto por el Código de Ética Partidaria.

La dirigencia del Partido, en todos sus niveles, mantendrá programas permanentes de afiliación y credencialización.

CÓDIGO DE JUSTICIA PARTIDARIA DEL PRI

De la Declaratoria de Renuncia

Artículo 120. Los militantes que renuncien voluntariamente al Partido, deberán hacerlo por escrito dirigido a la Comisión de Justicia Partidaria de la entidad federativa en que radique, solicitando la declaratoria respectiva.

Artículo 121. La Comisión de Justicia Estatal o del Distrito Federal según corresponda, sustanciará la solicitud, otorgando un término de diez días hábiles para que sea ratificada o retirada. De no comparecer en dicho plazo, se tendrá por no interpuesto el escrito de solicitud de renuncia.

Artículo 122. Los miembros del Partido que soliciten la declaratoria de la pérdida de militancia prevista en el artículo 63 de los Estatutos, deberán cumplir los siguientes requisitos:

- I. Presentar su solicitud por escrito donde se haga constar nombre y firma del solicitante, nombre y domicilio de la o el militante denunciado, la narración de los hechos que se evidencian relacionados con las hipótesis del citado artículo 63; y*
- II. Acompañar las pruebas con las que pretenda demostrar las imputaciones. En los casos a que se refieren las fracciones II y III del artículo 63 de los Estatutos, cuando se trate de hechos públicos y notorios, bastará la solicitud que formule la*

Secretaría Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria para que ésta emita la declaratoria de la pérdida de militancia. Todo procedimiento que se instaure para la instrucción de la solicitud de pérdida de militancia, se sujetará a las reglas contenidas en el Libro Cuarto, Título Primero de este ordenamiento.

Artículo 123. Una vez emitida la declaratoria correspondiente, será notificada al interesado y, para los efectos procedentes, a la Comisión Nacional y a la Secretaría de Organización del Comité Nacional, Directivo o del Distrito Federal respectivo.

D) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

3. CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante del *PRI*, por regla general debe acudir a las instancias partidistas competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.

En consecuencia, los partidos políticos (en el caso el *PRI*) tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del *COFIPE*, precepto que, derivado de la reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la *LGPP*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que además los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la *Constitución*, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y voluntaria.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/NAJS/JD01/ZAC/92/2018

- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la *Sala Superior*, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**,²⁸ donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia 21/2013, de rubro **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,²⁹ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria³⁰ y como estándar probatorio.³¹

²⁸ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

²⁹ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.

³⁰ Tesis de Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

³¹ Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. Véase la nota 35.

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación³² ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la *Sala Superior* consideró en la sentencia referida, que para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciados sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

³² Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA**, **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO**.

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con fundamento en el diverso 441 de la *LGPE*, lo que implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento ordinario sancionador una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo

acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberadamente la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se

genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

4. HECHOS ACREDITADOS Y PRECISIONES

Como se ha mencionado, las denuncias presentadas por los afectados versan sobre la sobre la supuesta violación a su derecho de libertad de afiliación, al ser incorporados al padrón del *PRI*, sin su consentimiento, así como la utilización de sus datos personales por dichos partidos políticos para sustentar tal afiliación.

Ahora bien, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de la infracción denunciada, debe precisarse lo siguiente:

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
1	Norma Araceli Jiménez Sánchez	16 de marzo de 2018 ³³	Correo electrónico de 10 de abril de 2018, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, donde informa que la ciudadana sí está afiliada al PRI desde el 25/03/2014	Afiliado Oficio PRI/REP-INE/279/2018, firmado por el representante del <i>PRI</i> ante el Consejo General del <i>INE</i> , a través del cual remitió la información proporcionada por el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político, en la cual se establece que Norma Araceli Jiménez Sánchez, sí se encuentra afiliada al mencionado ente jurídico. Anexó copia simple de la cédula de afiliación.

³³ Visible a foja 05 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/NAJS/JD01/ZAC/92/2018

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir un documento idóneo aportado por el <i>PRI</i>, en tanto que únicamente ofreció como prueba copia simple de la cédula de afiliación, se concluye que se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
2	Julio Adrián Lara Estrada	23 de marzo de 2018 ³⁴	Correo electrónico de 10 de abril de 2018, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, donde informa que el ciudadano sí está afiliado al PRI desde el 05/01/2012	<p>Oficio PRI/REP-INE/279/2018, firmado por el representante del <i>PRI</i> ante el Consejo General del <i>INE</i>, a través del cual remitió la información proporcionada por el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político, en el cual refiere que derivado de la carga de trabajo que se tiene en dicha Subsecretaría, continuarían recabando información relacionada con dicho ciudadano.</p> <p>Oficio PRI/REP-INE/381/2018, firmado por el representante del <i>PRI</i> ante el Consejo General del <i>INE</i>, a través del cual remitió la información proporcionada por el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político, manifestando que no ha sido posible concluir con la digitalización del archivo, por lo cual se han visto limitados para recabar la información solicitada.</p> <p>Oficio PRI/REP-INE/451/2018, firmado por el representante del <i>PRI</i> ante el Consejo General del <i>INE</i>, a través del cual remitió la información proporcionada por el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político, refiriendo que derivado de la carga de trabajo que se tiene en dicha Subsecretaría, continuarían recabando información relacionada con dicho ciudadano.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del <i>PRI</i>, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida.</p>				

Las constancias aportadas por la *DEPPP*, al ser documentos generados en ejercicio de sus atribuciones se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del Reglamento de Quejas, mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la *LGPE* y 27, párrafo 2 del Reglamento

³⁴ Visible a foja 24 del expediente.

citado tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran controvertidas ni desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

Por otra parte, las documentales allegadas al expediente por el partido político denunciado, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracción II del *Reglamento Quejas* y, por tanto, por sí mismas carecen de valor probatorio pleno; sin embargo, podrán generar plena convicción en esta autoridad, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio; ello, al tenor de los artículos 462, párrafo 3 de la *LGIPE*, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención.

5. CASO CONCRETO

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por los quejosos, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5, del *COFIPE*, cuyo contenido se replica en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; esto es, partido político, candidato o inclusive cualquier persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De esta forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

En tal sentido, por cuanto hace a la existencia del supuesto normativo, debe reiterarse, como se estableció en apartados previos, que desde hace décadas está reconocido en la legislación de este país, la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, y de igual manera, que las personas en este país tienen el derecho de que se proteja su información privada y sus datos personales, todo lo cual está previsto desde el nivel constitucional.

En el caso, si bien en el marco normativo se hace referencia a los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, identificados con el número de resolución CG617/2012 y, de igual manera se transcribe la parte de disposiciones estatutarias del partido político denunciado, relacionada con el procedimiento de afiliación, lo cierto es que, por el carácter constitucional de tales derechos, la existencia de los mismos —y las obligaciones correlativas a éstos—, no está condicionada al reconocimiento por parte de los sujetos obligados, en este caso, de los partidos políticos.

En otras palabras, si la libertad de afiliación política, en todas sus vertientes, es un derecho de los ciudadanos de este país desde hace varios decenios, resulta por demás evidente que las obligaciones de los partidos políticos que deriven de esta garantía -respetar la libertad de afiliación y, de ser necesario, acreditar que la incorporación a cada instituto político- no debe estar sujeta o condicionada a que éstos establezcan en sus normas internas disposiciones encaminadas a su protección, es decir, no depende, del momento en el que los partidos políticos hayan incluido en sus normas internas la obligación de que la afiliación sea voluntaria.

Por cuanto hace al elemento subjetivo señalado líneas arriba, debe destacarse que, la autoridad, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, debe contar con

elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

En principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita así como el señalamiento que formula en contra de la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde al quejoso.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la *LGSMI* de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441, de la *LGIFE*.

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que contaba con el consentimiento de los quejosos para afiliarlos a su partido político, y no a los ciudadanos que negaron haber solicitado su inclusión en el padrón de militantes.

Como vimos, en el apartado anterior, está demostrado a partir de la información proporcionada por la *DEPPP* que los ciudadanos denunciados, se encontraron, en ese momento, como afiliados del *PRI*.

Por otra parte, en los casos que comprenden el presente procedimiento, el *PRI* no demuestra con medios de prueba, que la afiliación respectiva fue el resultado de la manifestación de la voluntad libre e individual de los ciudadanos, en los cuales *motu*

proprio, expresaron su consentimiento y, por ende, proporcionaron sus datos personales a fin de llevar a cabo la afiliación a dicho instituto político.

Así pues, en estos casos la carga de la prueba corresponde al *PRI*, en tanto que el dicho de los actores consiste en afirmar que no dieron su consentimiento para ser afiliados, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba; en tanto que el partido político, cuya defensa consiste básicamente en afirmar que sí cumplieron las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación, tienen el deber de probar esa situación.

Ahora bien, tal y como quedó de manifiesto apartados arriba, **la libertad de afiliación en materia político-electoral, es un derecho reconocido y así garantizado para todo ciudadano de nuestro país**, al menos desde hace varias décadas, tanto a nivel constitucional como legal, **el cual es concebido como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido político, permanecer afiliado a éste, desafiliarse e, incluso, no pertenecer a ninguno.**

Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección de datos personales e información relacionada con la vida privada de las personas, es igualmente un derecho con una trayectoria de protección por demás lejana.

En este sentido, la garantía y protección a los citados derechos, evidentemente no deriva de disposiciones reglamentarias al interior de los institutos políticos, que prevean como obligación del partido político la conservación de los expedientes de afiliación de cada miembro, ni tampoco a partir de la emisión de los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, emitidos por el propio *IFE* ahora *INE* en la Resolución CG617/2012, sino que, como se vio, el derecho tutelado deviene de disposiciones de rango supremo, el cual debe ser tutelado en todo momento, y no a partir de normas internas o reglamentarias que así lo establezcan.

En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos políticos, en todas sus vertientes, es un derecho de los ciudadanos previsto como garantía constitucional, también lo es la obligación de los partidos políticos de preservar, y en su caso, de demostrar, en todo momento, que cualquier acto que

engendre la voluntad de un ciudadano para formar parte en las filas de un instituto político, o bien, ya no pertenecer a estos, deben estar amparados en el o los documentos que demuestren indefectiblemente el acto previo del consentimiento – para los casos en que se aduce no mediar consentimiento previo para ser afiliados- siendo **ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no se tiene o tenía el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes**, o –para el caso de la omisión de atender solicitudes de desafiliación- demostrar que dieron cauce legal a las solicitudes de desafiliación de manera pronta y oportuna y, que derivado de ello, ya no se encuentran en sus registros de militantes.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior, incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que en su defensa se deben presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

Con base en todo lo expuesto, toda vez que los denunciantes manifiestan no haber otorgado su consentimiento para ser agremiados al partido; que está comprobada la afiliación de todos, y que el *PRI*, no cumplió su carga para demostrar que la afiliación sí se solicitó voluntariamente, tal y como se expondrá más adelante, **esta autoridad electoral considera que existe una vulneración al derecho de afiliación de los quejosos y que, intrínsecamente, para la configuración de esa falta, se utilizaron sin autorización sus datos personales**, lo cual, debe ser considerado para la imposición de la sanción que, en cada caso, amerite.

Como quedó evidenciado, en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, está demostrado, a partir de la información proporcionada por la *DEPPP* y el propio instituto político denunciado, que los quejosos se encuentran o encontraron, en algún momento afiliados al *PRI*.

En ese sentido, el *PRI* no demuestra con medios de prueba mínimos e idóneos, que la afiliación respectiva sea el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de los ciudadanos, en los cuales, ellos mismos, *motu proprio*, expresaron su consentimiento y, por ende, proporcionaron sus datos personales a fin de llevar a cabo la afiliación a dicho instituto político.

Al respecto, se debe recordar que, para el caso que nos ocupa, la carga de la prueba en torno a la acreditación de la voluntad de los quejosos referente a su incorporación a las filas del partido corresponde al *PRI*, en tanto que el dicho de los actores consiste en sostener que no dieron su consentimiento para ser afiliados, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba; por lo tanto, los partidos políticos, cuya defensa consiste básicamente en afirmar que sí cumplieron las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación, tienen el deber de probar esa situación.

Asimismo, es importante recalcar que el *PRI*, únicamente admitió la afiliación de Norma Araceli Jiménez Sánchez, y respecto de Julio Adrián Lara Estrada, no admitió, ni negó su militancia, únicamente se limitó a señalar que continuaba en la búsqueda de la información relacionada con el mismo.

En este sentido, el estudio de fondo del presente asunto se realizará en dos apartados,
conforme a lo siguiente:

a) Caso en los que el PRI indicó que la ciudadana sí se encuentra afiliada y proporcionó copia simple de la cédula de afiliación.

Respecto de Norma Araceli Jiménez Sánchez, el *PRI* exhibió **copia simple** del formato *único de afiliación y actualización al registro partidario*, con su firma autógrafa.

No obstante, en concepto de esta autoridad electoral, dicho medio de prueba es insuficiente para sustentar la debida afiliación de la denunciante, toda vez que la copia simple del formato antes referido no acredita la manifestación de la voluntad de la quejosa, pues el hecho de tratarse de una mera copia fotostática, impide demostrar la libre afiliación de la ciudadana, al no constituir un medio probatorio idóneo y tratarse un mero indicio que, por sí mismo, no genera convicción de los hechos que se pretenden acreditar.

Esto es, el denunciado no presentó algún otro elemento probatorio idóneo para acreditar que sí existió la voluntad de Norma Araceli Jiménez Sánchez, de pertenecer a las filas de ese ente político, como lo sería, el original o copia certificada del *formato único de afiliación y actualización al registro partidario* correspondiente o, en su caso, cualquier otro documento que diera certeza a dicho medio de prueba, como lo serían, por ejemplo, documentales que evidenciaran el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas, el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras; ello, a pesar de las diversas oportunidades que tuvo durante la secuela procesal que integran el procedimiento administrativo sancionador citado al rubro, lo que de suyo, permite colegir que existe un allanamiento tácito del denunciado a lo referido por la quejosa.

Por tanto, es válido concluir que los elementos probatorios aportados por el denunciado, consistentes en copia simple del *formato único de afiliación y actualización al registro partidario* de la ciudadana cuyo caso aquí se estudia, no es

suficiente ni idóneo para acreditar que medió el consentimiento expreso de éstas para querer pertenecer a la lista de agremiados del *PRI*.

Siendo que precisamente, dicha copia simple, constituye una prueba documental privada, en términos de lo dispuesto en los artículos 461, párrafo 3, inciso b) de la *LGIPE* y 22, párrafo 1, fracción II, del *Reglamento de Quejas*.

En tal virtud, dichas documentales no se consideran suficientes para tener por demostrada la voluntad de la quejosa de afiliarse al referido ente político, sino únicamente generan un indicio singular y aislado de lo que pretende probar el denunciado, toda vez que el *PRI* no proporcionó los documentos originales atinentes o algún otro que diera certeza probatoria a las copias simples, inclusive, tal y como se precisó en el apartado que antecede, dicho partido político tuvo la opción de aportar los documentos que, en el caso, debieron aportar las ciudadanas para afiliarse o el folio que en su caso generara la oficina correspondiente, pero no lo hizo.

Con base en lo expuesto, se considera que no debe concederse valor y eficacia probatoria alguna a las citadas documentales, ya que, con independencia de las razones expuestas en los párrafos que preceden, esta autoridad debe privilegiar y garantizar el derecho de libertad de afiliación en favor de las ciudadanas denunciantes, toda vez que el partido político, al tratarse de un ente de interés público, tiene la obligación de acreditar con la documentación idónea la debida afiliación de las denunciantes.

En ese sentido los partidos políticos como entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están obligados a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que las afiliaciones que realizan, deben ser de manera libre, voluntaria y personal y, como consecuencia de ello, **conservar y resguardar** y, en su caso, **exhibir** la documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho.

En este sentido, se encuentran compelidos a acreditar con las pruebas idóneas y correctas que las afiliaciones se realizaron conforme a las disposiciones legales y estatutarias, pues precisamente corresponde al oferente y más, tratándose de una institución política, acompañarla con los elementos suficientes para su perfeccionamiento y consiguiente valor legal.

Siendo menester señalar que, con las documentales aludidas se dio vista a la denunciante, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación a éste; no obstante, fue omisa en responder a tal solicitud; sin embargo, no debe pasar por desapercibido que dicha quejosa fue contundente y categórica en manifestar en su escrito inicial de queja, que jamás dio su consentimiento para ser enlistada en el padrón de afiliados del denunciado.

Por tanto, se reitera que con la prueba presentada por el denunciado, no es dable concluir que existe la certeza que medió la voluntad de la ciudadana de querer pertenecer a filas del *PRI*, al tratarse de un indicio singular y aislado que no se encuentra corroborado por algún otro medio de prueba; por lo que es claro que sólo puede arrojar indicios en torno a la veracidad de lo afirmado por el ente de interés público, incapaz de corroborar su afirmación en torno a que la afiliación de la quejosa a las filas del instituto político estuvo precedida de una manifestación de voluntad libre y auténtica.

En mérito de todo lo expuesto, se colige que existe evidencia que hace suponer que la transgresión al derecho de libre afiliación, en su modalidad positiva —afiliación indebida— a la que se refiere en este apartado, fue producto de una acción ilegal por parte del *PRI*.

A similar conclusión arribó este Consejo General en la resolución INE/CG1211/2018, de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/IJS/CG/37/2017, derivado de una falta de la misma naturaleza a la que aquí se estudia, en la que se determinó que dichas documentales no se consideran suficientes para tener por demostrada la voluntad de los quejosos de afiliarse a un ente político, sino únicamente generan un indicio singular y aislado de lo que pretende probar el denunciado.

b) Caso en el que el PRI no se pronunció sobre la afiliación de un ciudadano.

Dentro de este supuesto se encuentra Julio Adrián Lara Estrada, sobre quien el partido político denunciado fue omiso en pronunciarse respecto a su afiliación, argumentando que derivado de los tiempos electorales en que se encontraban y las cargas de trabajo, continuaba en la búsqueda de la información relacionada con el ciudadano en cita, sin admitir o negar que fuera su militante, sin embargo, tenía y tiene la obligación de verificar, revisar y constatar fehacientemente que dicho ciudadano otorgó, de forma personal, libre y voluntaria, su intención de afiliarse a sus filas, a través de los respectivos documentos y formatos en los que se constara y probara ese hecho.

En ese sentido, debe precisarse que el partido político en comento tiene el deber de **conservar y resguardar** con el debido cuidado y, para el caso, **exhibir**, la documentación soporte en la que conste la afiliación libre y voluntaria de sus militantes o afiliados, puesto que, se insiste, le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Por lo que, es válido concluir que el *PRI* no demostró que la afiliación del ciudadano, se realizó a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que dicho denunciante haya dado su consentimiento libre para ser afiliado.

Toda vez que, de acuerdo con lo razonado en el apartado correspondiente a la *Carga y Estándar Probatorio sobre Indebida Afiliación a un Partido Político*, el *PRI* tenía la carga de conservar y resguardar la documentación en la que conste que Julio Adrián Lara Estrada acudió de manera libre y voluntaria a solicitar su afiliación a dicho partido político, toda vez que, como ya se enunció, le corresponde al partido la verificación de dichos requisitos y, por tanto, la exhibición de la documentación atinente, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que dicho ciudadano cumplió con los requisitos

constitucionales, legales y partidarios aplicables en el momento en que ocurrieron los hechos.

Bajo ese contexto, correspondía al *PRI* demostrar que el ciudadano en cuestión manifestó, en su momento, su consentimiento, libre y voluntario para afiliarse a dicho partido político, para lo cual tenía el deber de exhibir los documentos y constancias respectivas, de ahí que al no haber aportado elemento probatorio alguno para demostrar dicha circunstancia, se estime fundado el procedimiento administrativo sancionador.

En conclusión, este órgano colegiado considera pertinente declarar **fundado** el presente procedimiento, pues se concluye que el *PRI* infringió las disposiciones electorales tendientes a demostrar la libre afiliación, en su modalidad positiva —afiliación indebida—, de los **dos ciudadanos** referidos en los incisos anteriores, quienes aparecieron como afiliados a dicho instituto político, por no demostrar el **ACTO VOLITIVO** de los mismos para ser agremiados a ese partido.

En efecto, como se demostró anteriormente, los denunciantes que aparecieron afiliados al *PRI*, manifestaron que ningún momento otorgaron su consentimiento para ello, siendo que dicho instituto político en ningún caso demostró lo contrario, por lo que se actualiza la violación al derecho fundamental de libre afiliación garantizado desde la Constitución y la ley, según se expuso.

Lo anterior, en tanto que el *PRI* no demostró que la afiliación se realizó a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que dichos ciudadanos hayan dado su consentimiento para ser afiliados, ni mucho menos que hayan permitido o entregado datos personales para ese fin, los cuales se estiman necesarios para procesar la afiliación, dado que estos elementos se constituyen como insumos obligados para, en su momento, llevar a cabo una afiliación, de ahí que esto sea necesario e inescindible.

Con base en ello, ante la negativa de los quejosos de haberse afiliado al *PRI*, correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de pruebas idóneas, que la afiliación se llevó a cabo a través de los mecanismos legales para ello, en donde

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/NAJS/JD01/ZAC/92/2018

constara fehacientemente la libre voluntad de los promoventes, lo que no hizo, siendo que el solo hecho de aparecer en su registro electrónico es insuficiente para acreditar el ejercicio libre, personal y voluntario del derecho de afiliación a ese ente.

Es decir, no basta con que los quejosos aparezcan como afiliados al *PRI* en sus registros electrónicos, sino que dicho instituto político debió demostrar, con documentación soporte o pruebas idóneas, que dicha afiliación se realizó de forma libre o voluntaria, o bien, que la aparición del nombre y datos de los quejosos en su padrón de militantes, fue consecuencia de un error involuntario o de alguna circunstancia diversa, pero no lo hizo.

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación al *PRI* implica, además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que pudiera haber servido de base o justificación al partido político para afiliar a los ahora quejosos.

Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales, tiene íntima vinculación con la indebida afiliación de los quejosos, lo cual ya quedó debidamente acreditado y, como consecuencia de ello, merece la imposición de las sanciones que se determinarán en el apartado correspondiente.

Cabe referir que a similar conclusión arribó este Consejo General en la resolución INE/CG120/2018, de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/ALC/CG/39/2017, así como en la resolución INE/CG/448/2018, de once de mayo de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2018, las cuales fueron confirmadas por el *Tribunal Electoral* al dictar sentencia el veintiocho de abril y once de mayo de dos mil dieciocho, en los medios de impugnación con clave SUP-RAP-

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/NAJS/JD01/ZAC/92/2018

047/2018³⁵ y SUP-RAP-137/2018³⁶, respectivamente, derivado de una falta de la misma naturaleza a la que aquí se estudia, en la que se determinó que el uso de datos personales poseía un carácter intrínseco o elemento esencial para la configuración de una afiliación indebida.

Ahora bien, más allá de la determinación de responsabilidad del partido político y, en el caso, de la consecuente imposición de sanción, esta autoridad debe tutelar el derecho fundamental de afiliación de los **dos denunciantes**, es decir, estamos frente a la defensa de un derecho humano de naturaleza político-electoral, que en términos del artículo 1° de la Constitución Federal debe ser respetado, protegido y garantizado por todas las autoridades del Estado Mexicano.

En ese sentido, resulta indudable que la intención de dichos denunciantes es **no** pertenecer más como afiliados al *PRI*.

Con base en ello, lo procedente ordenar a dicho denunciado, para que **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución**, en el supuesto que los quejosos continúen en su padrón de afiliados, **sin mayor trámite**, cancele el registro de cada uno de ellos como sus militantes, con efectos a partir de la fecha en que presentaron su denuncia; por lo que, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, las pruebas que amparen el cumplimiento.

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017, de cinco de enero de dos mil diecisiete, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el INE, que lo vincule con un instituto político en particular.

³⁵ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/informacion_jurisdiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0047-2018.pdf

³⁶ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/informacion_jurisdiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0137-2018.pdf

CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de las faltas denunciadas, así como la responsabilidad por parte del partido político denunciado, en los casos detallados en el considerando que antecede, procede ahora determinar la sanción correspondiente, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 355, párrafo 5 del *COFIPE*, cuyo contenido se reproduce en el diverso 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, relativo a la gravedad de la responsabilidad en que se incurra; el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; y, en su caso, la reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.

En relación con ello, el *Tribunal Electoral* ha sostenido que para individualizar la sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción electoral.

1. Calificación de la falta

A) Tipo de infracción

Partido	Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
<i>PRI</i>	La infracción se cometió por una acción del partido político denunciado, que transgrede disposiciones de la <i>Constitución</i> y del <i>COFIPE</i> , en el momento de su comisión.	La conducta fue la afiliación indebida y el uso no autorizado de los datos personales de 10 ciudadanos por parte del <i>PRI</i> .	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la <i>Constitución</i> ; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2; 341, párrafo 1, inciso a), 342, párrafo 1, incisos a) y n) y 354, párrafo 1, inciso a), del <i>COFIPE</i> ; disposiciones que se

Partido	Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
			encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la <i>LGIPE</i> ; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), t) y u) de la <i>LGPP</i> .

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o prohibidas.

En el presente asunto, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el caso concreto, se acreditó que el *PRI* incluyó o mantuvo indebidamente en su padrón de afiliados, a diez ciudadanos, sin demostrar que para incorporarlos medió la voluntad de éstos de inscribirse, violentando con ello lo establecido en los artículos 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; y 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e) del *COFIPE*; 443, párrafo 1, incisos a) y n); de la *LGIPE*, y 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *LGPP*.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de los ciudadanos mexicanos, de optar libremente por ser o no militantes de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, efectivamente consintieron libremente en ser agremiados a los distintos partidos políticos.

Por otra parte, como se analizó, para los casos en que no se demostró la voluntad de pertenecer como afiliados al *PRI*, se observa un uso indebido de datos personales, que a la postre debe ser sancionado por esta autoridad.

Lo anterior, ya que lógicamente se utilizaron datos personales como lo son, al menos el nombre y la clave de elector de cada uno de los ciudadanos para ser afiliados, lo cual ocurrió en contra de su voluntad, de ahí que el uso de sus datos personales se constituya como un elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida.

De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción correspondiente al *PRI*.

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que el *PRI* transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la normativa interna del partido político, y que, tal infracción se cometió en detrimento de los derechos de **dos** ciudadanos, esta situación no conlleva a estar en presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de afiliación al instituto político denunciado, quien incluyó en su padrón de militantes a los quejosos, sin demostrar el consentimiento previo para ello.

Caber precisar, que en apartados subsecuentes se analizará a detalle el impacto que tuvo dicha infracción, en atención al número de personas afiliadas indebidamente.

D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

- a) Modo.** En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles al *PRI*, consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A,

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/NAJS/JD01/ZAC/92/2018

fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIFE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *LGPP*, al incluir en su padrón de afiliados a **dos ciudadanos**, sin tener la documentación soporte que acredite fehacientemente la voluntad de éstos de pertenecer al referido instituto político, tal y como se advirtió a lo largo de la presente Resolución de forma pormenorizada.

- b) Tiempo.** En el caso concreto, como se razonó en el considerando que antecede, por cuanto hace a las afiliaciones sin el consentimiento previo de los ciudadanos, acontecieron en diversos momentos, mismos que se resumen en la tabla siguiente:

No.	Nombre	PRI	DEPPP
1	Norma Araceli Jiménez Sánchez	Se encuentra afiliada al <i>PRI</i> desde el 23/05/2014	Se encuentra afiliada al <i>PRI</i> , desde el 23/05/2014
2	Julio Adrián Lara Estrada	No proporcionó información	Se encuentra afiliado al <i>PRI</i> desde el 05/01/2012

- c) Lugar.** Con base a la información proporcionada por la *DEPPP*, se deduce que las faltas atribuidas a los partidos políticos se cometieron de la siguiente manera:

No.	Nombre	Entidad federativa
1	Norma Araceli Jiménez Sánchez	Zacatecas
2	Julio Adrián Lara Estrada	Jalisco

E) Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Se considera que en el caso existe una conducta **dolosa** por parte del *PRI*, al vulnerar lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la Constitución Federal; 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *LGPP*.

La falta se califica como **dolosa**, por lo siguiente:

- El *PRI* es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus constitucional de **entidad de interés público**, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Federal; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- El *PRI* está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la *LGPP*.
- El de libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
- La desafiliación a un partido político, es una modalidad del derecho fundamental de libre afiliación, por el cual un ciudadano elige libremente, en cualquier momento y sin restricción alguna de terceros, ya no pertenecer al mismo.

- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.
- Todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación o desafiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.
- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a) y e), de la *LGPP*.
- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria**.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición (para el caso de solicitudes de desafiliación), en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por

razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.

- La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, es una violación de orden constitucional y legal que **requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento.**

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta se considera dolosa, porque:

- 1) Los quejosos aluden que no solicitaron voluntariamente, en momento alguno, su registro o incorporación como militantes al *PRI*; sin que dicha afirmación fuera desvirtuada.
- 2) Quedó acreditado que los quejosos se encuentran en el padrón de militantes del *PRI*, conforme a lo informado por la *DEPPP*, quien precisó que, derivado del padrón de militantes capturado por ese instituto político, con corte al treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, a efecto de demostrar que contaba con el número mínimo de afiliados para la conservación de su registro.
- 3) El partido político denunciado no demostró con las pruebas idóneas, que las afiliaciones de los quejosos se hubieran realizado a través de los mecanismos legales y partidarios conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y voluntaria de los denunciantes.
- 4) El partido denunciado no demostró ni probó que la afiliación de los quejosos fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun indiciaria, para estimar que la afiliación fue debida y apegada a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.

F) Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el *PRI*, se cometió al afiliar indebidamente a diez ciudadanos, sin demostrar el acto volitivo de éstos para ingresar en sus padrones de militantes, así como de haber proporcionado sus datos personales para ese fin.

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en garantizar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, mediante la conservación de los documentos atinentes que permitan demostrar el acto de voluntad de los ciudadanos quejosos de militar en ese partido político.

2. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A) Reincidencia

Por cuanto a la **reincidencia** en que pudo haber incurrido el partido político, este organismo electoral autónomo considera que **no se actualiza**.

De conformidad con el artículo 355 párrafo 6 del *COFIPE*, cuyo contenido reproduce el diverso 458, párrafo 6 de la *LGIFE*, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el mencionado *Código*, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, la Sala Superior ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);
2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
3. Que en ejercicios anteriores el infractor **haya sido sancionado por esa infracción mediante Resolución o sentencia firme.**

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el *Tribunal Electoral*, a través de la Tesis de Jurisprudencia **41/2010**, de rubro **REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN**.³⁷

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con anterioridad.

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta.

En este sentido, debe precisarse que, en el presente asunto, no puede considerarse actualizado dicho supuesto por cuanto hace al *PRI*, pues en los archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya sancionado a este instituto político por faltas como la que se sanciona por esta vía, que se hayan dictado con anterioridad a los hechos materia de las presentes denuncias.

B) Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias

³⁷ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010>

particulares de cada caso concreto, y para cada partido político, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de los ciudadanos al partido político, pues se comprobó que el *PRI* los afilió sin demostrar, contar con la documentación soporte correspondiente, que medió la voluntad de éstos de pertenecer a la lista de agremiados de dicho instituto político.
- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, incluso en su modalidad de desafiliación, de optar por ser o no militante de algún partido político, y la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.
- Para materializar la indebida afiliación de los denunciados, se utilizaron indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para formar el padrón de afiliados del *PRI*.

- No existió un beneficio por parte del partido denunciado, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral.
- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso Electoral.
- No existe reincidencia por parte del *PRI*.

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente **calificar la falta** en que incurrió el *PRI* como de **gravedad ordinaria**, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el partido denunciado dolosamente infringió el derecho de libre afiliación de los hoy quejosos, lo que constituye una violación al derecho fundamental de los ciudadanos reconocidos en la *Constitución*.

C) Sanción a imponer

Ahora bien, la mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción.

Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor entidad.³⁸

³⁸ Véase la tesis XXVIII/2003 de la Sala Superior, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/NAJS/JD01/ZAC/92/2018

El artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIPE*, dispone el catálogo de sanciones a imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México; reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita; y en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la *Constitución* y de la *LGIPE*, con la cancelación de su registro como partido político.

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción (especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción acreditada), así como la conducta realizada por el *PRI* se determina que debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la *LGIPE*, confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realicen una falta similar.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se

toma en cuenta que ni el *COFIPE*, ni la *LGIPE*, determinan pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo establecen las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

Asimismo, es importante tomar en cuenta el número de ciudadanos afiliados indebidamente al *PRI*, es decir, los **dos ciudadanos**.

Con base en lo anterior, este *Consejo General* estima que, derivado de las circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida al *PRI*, justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, el cual se encuentra replicado en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGIPE*, consistente en una **MULTA unitaria por cuanto hace a cada ciudadano sobre quienes se cometió la falta acreditada**, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto.

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la sanción a imponer.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/NAJS/JD01/ZAC/92/2018

En este orden de ideas, es pertinente hacer notar, que ha sido criterio de esta autoridad, en la resolución INE/CG120/2018, de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/ALC/CG/39/2017, así como en la resolución INE/CG/448/2018, de once de mayo de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2018, las cuales fueron confirmadas por el *Tribunal Electoral* al dictar sentencia el veintiocho de abril y once de mayo de dos mil dieciocho, en los medios de impugnación con clave SUP-RAP-047/2018³⁹ y SUP-RAP-137/2018⁴⁰, respectivamente, en los que se sancionó por una indebida afiliación de un ciudadano, en cada caso, con una multa equivalente a 642 (seiscientos cuarenta y dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento de la comisión de la conducta, sanción que se estima debe tomarse como base para el presente asunto, si se considera que en dichos asuntos se demostró la comisión de una infracción similar a la que acontece en los casos que aquí se resuelven.

En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta causa, en específico **que no se refiere a la interposición de una sola queja** —a diferencia de lo que aconteció en los precedentes citados—, **sino de una multiplicidad de quejas y afiliaciones indebidas, las cuales han quedado acreditadas en autos**, es claro que la individualización de la sanción aplicada con motivo de la afiliación indebida de los ciudadanos al partido político denunciado, debe resultar proporcional al número de ciudadanos en cuyo perjuicio se cometió la falta, sin perder de vista las condiciones socioeconómicas de cada instituto político, y no simplemente, los hechos denunciados y acreditados en el presente procedimiento, a fin de que la sanción que se imponga resulte efectivamente proporcional sin ser excesiva.

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad debe determinar su monto o cuantía, **tomando en cuenta** las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica

³⁹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/informacion_jurisdiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0047-2018.pdf

⁴⁰ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/informacion_jurisdiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0137-2018.pdf

del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar de forma individual la multa que corresponda.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión que tiene sustento en la Tesis relevante **XXVIII/2003**,⁴¹ emitida por el *Tribunal Electoral*, misma que a letra establece:

SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.- *En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.*

Ahora bien, a juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con base en lo dispuesto en la fracción II del numeral citado, lo procedente es imponer sendas **multas** equivalentes a **seiscientos cuarenta y dos** días de salario mínimo

⁴¹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/NAJS/JD01/ZAC/92/2018

general para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) al *PRI*, **por cada uno de los ciudadanos que se considera fueron afiliados indebidamente** y que aparecen en su padrón de afiliados.

Cabe precisar que iguales sanciones, han sido impuestas por este Consejo General, al emitir diversas resoluciones que han resuelto procedimientos ordinarios sancionadores por indebidas afiliaciones y, que además han sido confirmadas por la *Sala Superior*, como son: INE/CG444/2018, confirmada a través del **SUP-RAP-138/2018**; INE/CG448/2018, confirmada en el **SUP-RAP-137/2018**; INE/CG446/2018, confirmada a través del **SUP-RAP-141/2018**, e INE/CG537/2018, confirmada en el **SUP-RAP-170/2018**, entre otras.

En virtud de que los ciudadanos denunciante fueron afiliados en diferentes momentos, a fin de adoptar la postura más favorable para los partidos políticos y reducir a la mínima expresión posible el carácter represor con que actúa el estado en los procedimientos de tipo sancionador, es que, para el cálculo de la multa correspondiente, en ambos casos, se debe tomar en cuenta el salario mínimo vigente al momento de realizar la afiliación y, obtenido el monto correspondiente, deberá hacerse la conversión a Unidades de Medida y Actualización.

Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia **10/2018**, emitida por el Tribunal Electoral, de rubro **MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN**.⁴²

Al respecto, es un hecho notorio que se invoca en términos de lo establecido en el artículo 461 de la *LGIE*, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fija anualmente los montos respectivos, mismos que al ser relacionados con las fechas de afiliación, para obtener la sanción que corresponde a cada partido político infractor, por cuanto a cada uno de los ciudadanos indebidamente afiliados, arrojan lo siguiente:

⁴² Consultable en la liga electrónica <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=UNIDAD,DE,MEDIDA,DE,ACTUALIZACI%C3%93N>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/NAJS/JD01/ZAC/92/2018

<i>PRI</i>		
Total de quejosos	Salario mínimo / UMA	Sanción a imponer
Afiliación en 2012		
1	62.33	\$40,015.86
Afiliación en 2014		
1	67.29	\$43,200.18
TOTAL		\$83,216.04
[Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].		

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, pues sin ser gravosa, sí puede inhibir al *PRI*, para que en el futuro vigile el cumplimiento de las normas de la materia.

Ahora bien, es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la *Constitución* —efectuada por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones.

En esas condiciones, lo procedente es transformar la sanción que se considera idónea, expresada en salarios mínimos, a Unidades de Medida y Actualización, para lo cual es necesario dividir el monto inicial (seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México multiplicado por el salario mínimo vigente en 2012 y 2014, según corresponda), entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, misma que equivale, para el ejercicio fiscal en curso a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.), resultando las siguientes cantidades:

No	Ciudadano	Fecha de afiliación	Multa impuesta en SMGV	Valor SMGV	Valor UMA vigente	Sanción en UMAS (A*B)/C ⁴³	SANCIÓN A IMPONER (C*D) ⁴⁴
			A	B	C	D	
1	Norma Araceli Jiménez Sánchez	23/05/2014	642	\$67.29	\$80.60	535.98	\$43,200.18

⁴³ Cifra al segundo decimal

⁴⁴ *Ídem*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/NAJS/JD01/ZAC/92/2018

No	Ciudadano	Fecha de afiliación	Multa impuesta en SMGV	Valor SMGV	Valor UMA vigente	Sanción en UMAS (A*B)/C ⁴³	SANCIÓN A IMPONER (C*D) ⁴⁴
			A	B	C	D	
2	Julio Adrián Lara Estrada	05/01/2012	642	\$62.33	\$80.60	496.47	\$40,015.86
TOTAL						1032.45	\$83,216.04

D) El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la infracción

Se estima que la infracción cometida por parte del *PRI*, aun cuando causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de la infracción.

E) Las condiciones socioeconómicas del infractor

Sobre este punto, es preciso señalar que conforme al Acuerdo INE/CG339/2017, emitido por este *Consejo General* el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se estableció que, entre otros, el *PRI* recibiría mensualmente en el presente ejercicio, por concepto de financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes, la siguiente cantidad:

SUJETO	Monto del financiamiento público para el sostenimiento de Actividades Ordinarias mensuales de 2018
<i>PRI</i>	\$91'241,389.00

Ahora bien, según fue informado por la *DEPPP*, a través del oficio **INE/DEPPP/DE/DPPF/5693/2018**, el monto de la ministración mensual correspondiente al mes de septiembre de dos mil dieciocho, debía ser ajustado en función de las sanciones administrativas pendientes de cubrir por dicho instituto político nacional, por lo cual la cifra total a recibir sería la siguiente:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/NAJS/JD01/ZAC/92/2018

SUJETO	IMPORTE DE LA MINISTRACIÓN DE MENSUAL DE 2018	IMPORTE TOTAL DE LAS SANCIONES SEPTIEMBRE 2018	IMPORTE DEL REINTEGRO DEL FINANCIAMIENTO LOCAL	IMPORTE NETO DE LA MINISTRACIÓN
<i>PRI</i>	\$91'241,389.00	\$45, 620,694	\$0.00	\$68,812,589.00

F) Impacto en las actividades del sujeto infractor

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta al *PRI*, no es de carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida, respecto al monto del financiamiento que recibirá por concepto de actividades ordinarias permanentes en el mes de septiembre del año en curso, los siguientes porcentajes:

Año	Monto de la sanción por ciudadano	Ciudadanos que fueron indebidamente afiliados	% de la ministración mensual por ciudadano ⁴⁵
2012	\$40,015.86	1	0.05%
2014	\$43,200.18	1	0.06%

Por consiguiente, la sanción impuesta al *PRI* no es de carácter gravoso, si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual correspondiente al mes de septiembre de este año.

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción cometida por el *PRI* (especialmente los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.

⁴⁵ Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con el financiamiento que recibe del *INE* para el mes de septiembre de dos mil dieciocho, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político sancionado.

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el partido político de mérito —tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagar sin que ello afecte sus operaciones ordinarias, además de que las sanciones son proporcionales a las faltas cometidas y se estima que, sin resultar excesivas ni ruinosas, pueden generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la *Sala Superior* en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-250/2009,⁴⁶ es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

QUINTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE LOS QUEJOSOS COMO MILITANTES. En tal sentido, se tiene que la voluntad de los denunciantes es no pertenecer al *PRI*, por lo que se debe vincular al partido político, para que, de ser el caso, en el supuesto que los quejosos continúen en su padrón de militantes, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentó su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, los medios de prueba que amparen el cumplimiento.

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017⁴⁷, de cinco de enero de dos mil diecisiete, en donde se concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político a la *DEPPP*, a fin de que en el ámbito de sus atribuciones procediera a dar de baja al

⁴⁶ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm>

⁴⁷ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/JDC/2/SUP_2017_JDC_2-626321.pdf

ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el *INE*; que lo vincule con un instituto político en particular.

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, amparado en el artículo 17 de la *Constitución*, se precisa que la presente determinación es impugnabile, tratándose de partidos políticos, a través del **recurso de apelación** previsto en el precepto 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como del **juicio para la protección de los datos personales de los ciudadanos** previsto en el artículo 79 del mismo ordenamiento, cuando se impugne por ciudadanos.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara **fundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra del **Partido Revolucionario Institucional**, al infringir las disposiciones electorales del derecho de libre afiliación —en su modalidad positiva (afiliación indebida) — de **dos ciudadanos**, en términos de lo establecido en el Considerando **TERCERO** de esta Resolución.

SEGUNDO. En términos del Considerando **CUARTO** de la presente Resolución, se impone al **Partido Revolucionario Institucional**, **una multa por la indebida afiliación de cada uno** de los **ciudadanos** aludidos, conforme a los montos que se indican a continuación:

No.	Quejosa o Quejoso	Sanción a imponer
1	Norma Araceli Jiménez Sánchez	535.98 (quinientos treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,200.18 (Cuarenta y tres mil doscientos pesos 18/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2014]

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/NAJS/JD01/ZAC/92/2018

No.	Quejosa o Quejoso	Sanción a imponer
2	Julio Adrián Lara Estrada	496.47 (cuatrocientos noventa y seis punto cuarenta y siete) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$40,015.86 (cuarenta mil quince pesos 86/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2012]

TERCERO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7 de la *LGIFE*, el monto de las multas impuestas **al PRI**, será deducido, según corresponda, de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dichos institutos políticos, una vez que esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su Considerando **CUARTO**.

CUARTO. Se vincula al *PRI* para que, de ser el caso, en el supuesto de que los quejosos continúen en su padrón de afiliados, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente resolución con efectos, a partir de la fecha en que presentaron su escrito de denuncia** y hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, las pruebas que amparen el cumplimiento, a fin de vigilar y corroborar el cumplimiento por parte del referido ente político, conforme a lo dispuesto en su Considerando **QUINTO**.

QUINTO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como del juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano previsto en el artículo 79 del mismo ordenamiento.

Notifíquese personalmente a los siguientes ciudadanos, así como, al partido *PRI* por conducto de su respectivo representante ante este *Consejo General*; y por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1244/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ORDINARIO
EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/JAEL/CG/103/2018
DENUNCIANTE: JANE ARELY ESPINOSA
LESSCIUR Y OTROS
DENUNCIADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/JAEL/CG/103/2018, INICIADO CON MOTIVO DE LAS QUEJAS PRESENTADAS POR JANE ARELY ESPINOSA LESSCIUR, JOSÉ DE JESÚS FRANCO LÓPEZ, MARTHA ARACELI LÓPEZ MOLINA, ELEAZAR ZUÑIGA MENDOZA, ANA REBECA FIGUEROA CRUZ, CHRISTIAN IVÁN OLIVARES AVALOS, MARÍA NANCY RUBÍN DOMÍNGUEZ, MÓNICA ISABEL MONTAÑO SÁNCHEZ, JUAN CARLOS AYALA VEGA, ADÁN FELIPE FELIPE, CLAUDIA ESMERALDA REYES MÁRQUEZ, OLGA ODILIA RÍOS SALAZAR, ERIKA FLORES LINARES Y NANCY ALEJANDRA TORRES GUTIÉRREZ, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, ATRIBUIBLES AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CONSISTENTES EN LA PRESUNTA AFILIACIÓN INDEBIDA DE LOS MENCIONADOS CIUDADANOS AL PARTIDO POLÍTICO EN CITA, SIN QUE HUBIERE MEDIADO CONSENTIMIENTO ALGUNO

Ciudad de México, 12 de septiembre de dos mil dieciocho.

GLOSARIO	
COFIPE	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

GLOSARIO	
<i>Comisión de Quejas</i>	Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>DEPPP</i>	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
<i>DERFE</i>	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
<i>INE</i>	Instituto Nacional Electoral
<i>LGIPE</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>LGPP</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>PRI</i>	Partido Revolucionario Institucional
<i>Reglamento de Quejas</i>	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>Sala Superior</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>Tribunal Electoral</i>	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

ANTECEDENTES

I. PRESENTACIÓN DE LAS DENUNCIAS. El veintiséis, veintiocho y veintinueve de marzo, así como el dos, tres, cuatro, cinco y trece de abril, todos de dos mil dieciocho, Jane Arely Espinosa Lessciur, José de Jesús Franco López, Martha Araceli López Molina, Eleazar Zuñiga Mendoza, Ana Rebeca Figueroa Cruz, Christian Iván Olivares Avalos, María Nancy Rubín Domínguez, Mónica Isabel Montaña Sánchez, Juan Carlos Ayala Vega, Adán Felipe Felipe, Claudia Esmeralda Reyes Márquez, Olga Odilia Ríos Salazar, Erika Flores Linares y Nancy Alejandra Torres Gutiérrez, respectivamente, presentaron escritos a través de los cuales hicieron del conocimiento de esta autoridad, hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, atribuibles al Partido Revolucionario Institucional, consistentes en su presunta afiliación indebida al partido político en cita, sin mediar consentimiento alguno para ello.

II. REGISTRO, ADMISIÓN DE LAS DENUNCIAS, RESERVA DE EMPLAZAMIENTO Y REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. Mediante acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, el titular de la UTCE, tuvo por recibidos los escritos de queja referidos en el punto de antecedentes que precede, ordenando el registro de los mismos como procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave de expediente UT/SCG/Q/JAEL/CG/103/2018.

En dicho proveído se admitió a trámite el presente asunto, se reservó lo conducente al emplazamiento y se ordenó requerir la siguiente información:

Sujeto requerido	Diligencia	Oficio y fecha de notificación	Observaciones
PRI	<p>Se le requirió informará lo siguiente:</p> <p>a) Si actualmente dentro de su Padrón de Afiliados se encuentran registrados los ciudadanos antes mencionados; para tal efecto se ordena anexar al presente requerimiento, en sobre cerrado, copia simple y legible de la credencial para votar de los ciudadanos en cuestión.</p> <p>b) De ser afirmativa su respuesta, informe la fecha de alta en el referido padrón y remita el original o copia certificada de los expedientes en que obren las constancias de afiliación correspondientes donde conste la manifestación de voluntad de los ciudadanos para ser afiliados a dicho partido político.</p> <p>c) De ser negativa su respuesta, indique si anteriormente los ciudadanos fueron afiliados y la fecha de su baja en el referido padrón, y remita el original o copia certificada de los expedientes en que obren las constancias de los</p>	<p>INE-UT/4882/2018</p> <p>25/abril/2018</p>	<p>Respuesta</p> <p>30/abril/2018</p>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JAEL/CG/103/2018

Sujeto requerido	Diligencia	Oficio y fecha de notificación	Observaciones
	procedimientos de desafiliación correspondientes.		
DEPPP	Informará si los ciudadanos denunciados se encuentran registrados en el padrón de afiliados del Partido Revolucionario Institucional. En su caso, indicando la fecha a partir de la cual se les dio de alta en dicho padrón y remitiera los originales o copia certificada de los expedientes donde obraran las constancias de afiliación respectivas.	INE-UT/4883/2018 25/abril/2018	Respuesta 26/abril/2018

III. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. En atención a que el PRI dio cumplimiento parcial al requerimiento que le fue realizado por la autoridad sustanciadora el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, proporcionando únicamente la información concerniente a Nancy Alejandra Torres Gutiérrez, Jane Arely Espinosa Lessciur y Erika Flores Linares, mediante Acuerdo de dieciséis de mayo del año en curso, se solicitó a dicho ente partidista, de nueva cuenta, remitiera a la UTCE, los datos respecto de los ciudadanos faltantes.

IV. EMPLAZAMIENTO.¹ El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, se ordenó el emplazamiento al *PRI*, para el efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto a las conductas que se le imputaban y aportara los medios de prueba que consideraran pertinentes.

Cabe señalar, que para tal efecto se les corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito.

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

¹ Visible a páginas 774-781 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JAEL/CG/103/2018

Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
INE-UT/8279/2018 ² 04/junio/2018	Citatorio: ³ 01 de junio de 2018. Cédula: ⁴ 04 de junio de 2018. Plazo: 05 al 11 de junio de 2018.	Escrito signado por el representante suplente del <i>PRI</i> ante el <i>Consejo General</i> , presentado el 12 de junio de 2018 ⁵

V. ALEGATOS.⁶ Mediante acuerdo de seis de julio de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a las partes, a efecto de que en vía de alegatos manifestaran lo que a su derecho conviniera.

El acuerdo de vista para alegatos, se diligenció en los siguientes términos:

Denunciado

Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
<i>PRI</i> INE-UT/11300/2018 ⁷ 10/julio/2018	Cédula: 10/julio/2018 Citatorio: 09/julio/2018 Plazo: 11 al 17 de julio de 2018.	Escrito signado por el representante suplente del <i>PRI</i> ante el <i>Consejo General</i> , presentado el 18/julio/2018 de 2018. ⁸

Denunciantes

No.	Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
1	Jane Arely Espinosa Lessciur INE- QROO/JDE/03/VE/0466/2018 09/julio/2018	Cédula: 09/julio/2018 Plazo: 10 al 16 de julio de 2018.	No dio respuesta

² Visible a página 784, legajo 2 del expediente.

³ Visible a página 785 a 789 del legajo 2 expediente.

⁴ Visible a página 790 a 791 del legajo 2 expediente.

⁵ Visible a páginas 808-810, legajo 2 del expediente.

⁶ Visible a páginas 811-813, legajo 2 del expediente.

⁷ Visible a página 819, legajo 2 del expediente.

⁸ Visible a páginas 889-894, legajo 2 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JAEL/CG/103/2018

No.	Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
2	José de Jesús Franco López	Acta circunstanciada INE/CIR/038/JDE03/COAH/17-08-2018 , de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, instrumentada por la 03 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en el estado de Coahuila, con motivo de la imposibilidad de localizar al quejoso en el domicilio señalado en su escrito de queja. Se notificó por estrados Plazo: 20 al 27 de agosto de 2018.	No dio respuesta
3	Martha Araceli López Molina	Cédula: 17/agosto/2018 Citatorio: 16/agosto/2018 Plazo: 20 al 24 de agosto de 2018.	No dio respuesta
4	Eleazar Zuñiga Mendoza INE/MICH/JDE04/- VS/484/2018 09/agosto/2018	Cédula: 09/agosto/2018 Plazo: 10 al 16 de agosto de 2018.	No dio respuesta
5	Ana Rebeca Figueroa Cruz INE/BC/JLE/VS/2076/2018 ⁹ 10/julio/2018	Cédula: 10/julio/2018 Plazo: 11 al 17 de julio de 2018.	No dio respuesta
6	Christian Iván Olivares Avalos INE/JAL/JDE15/VE/745/2018 10/julio/2018	Cédula: 10/julio/2018 Plazo: 11 al 17 de julio de 2018.	No dio respuesta
7	María Nancy Rubín Domínguez INE/JDE12/VE/1773/18 18/julio/2018	Cédula: 18/julio/2018 Citatorio: 17/julio/2018 Plazo: 18 al 24 de julio de 2018.	No dio respuesta

⁹ Visible a página 819, legajo 2 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JAEL/CG/103/2018

No.	Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
8	Mónica Isabel Montañó Sánchez INE/BC/JLE/VS/2077/2018 ¹⁰ 10/julio/2018	Cédula: 10/julio/2018 Plazo: 11 al 17 de julio de 2018.	No dio respuesta
9	Juan Carlos Ayala Vega INE/BC/JLE/VS/2078/2018 ¹¹ 10/julio/2018	Cédula: 10/julio/2018 Plazo: 11 al 17 de julio de 2018.	No dio respuesta
10	Adán Felipe Felipe INE/MICH/JDE04/- VS/485/2018 10/agosto/2018	Cédula: 10/agosto/2018 Plazo: 13 al 17 de agosto de 2018.	No dio respuesta
11	Claudia Esmeralda Reyes Márquez INE/MICH/JDE04/- VS/486/2018 10/agosto/2018	Cédula: 10/agosto/2018 Plazo: 13 al 17 de agosto de 2018.	No dio respuesta
12	Olga Odilia Ríos Salazar INE/VE/JDE09/NL/0729/2018 24/julio/2018	Cédula: 24/julio/2018 Plazo: 25 al 31 de julio de 2018.	No dio respuesta
13	Erika Flores Linares INE-UT/11301/2018 ¹² 13/julio/2018	Cédula: 13/julio/2018 Plazo: 16 al 20 de julio de 2018.	No dio respuesta
14	Nancy Alejandra Torres Gutiérrez INE-UT/11302/2018 ¹³ 11/julio/2018	Cédula: 11/julio/2018 Plazo: 11 al 18 de julio de 2018.	No dio respuesta

¹⁰ Visible a página 819, legajo 2 del expediente.

¹¹ Visible a página 819, legajo 2 del expediente.

¹² Visible a página 819, legajo 2 del expediente.

¹³ Visible a página 819, legajo 2 del expediente.

VI. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. En su oportunidad, toda vez que no había diligencias pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la Comisión.

VII. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS. En la Octogésima Cuarta Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el seis de septiembre de dos mil dieciocho, la Comisión de Quejas y Denuncias del *INE* analizó el Proyecto de Resolución del procedimiento sancionador ordinario al rubro identificado, en la cual determinó aprobarlo por unanimidad de votos de sus integrantes.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión de Quejas*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte del *PRI*, en perjuicio de los ciudadanos que han sido señalados a lo largo de la presente determinación.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JAEL/CG/103/2018

Ahora bien, conforme al artículo 23 del *COFIPE*, los partidos políticos ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en el citado Código, correspondiendo al Instituto Federal Electoral —hoy INE— vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n); y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho Código, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38 del dispositivo legal en cita, las cuales son sancionables por el *Consejo General*.

Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443, párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la *LGIPE* y 25 de la *LGPP*, respectivamente.

En consecuencia, siendo atribución del *Consejo General* conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta competente para conocer y resolver respecto de las presuntas infracciones denunciadas en el procedimiento sancionador ordinario, atribuidas al *PRI* derivado, esencialmente, de las indebidas afiliaciones al citado instituto político.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,¹⁴ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.

¹⁴ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de ciudadanos.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIPE* —los cuales contienen reglas que ya se encontraban previstas en el *COFIPE*, en los artículos 342, párrafo 1, incisos a); 356, 361, 364, 365 y 366—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO.

En el procedimiento en que se actúa, las presuntas faltas (indebida afiliación), en algunos casos, se cometieron durante la vigencia del *COFIPE*, motivo por el cual, en las situaciones que así lo ameriten, la normativa electoral en comento, misma que se encontraba vigente al momento en que sucedieron los hechos denunciados.

En efecto, de conformidad con lo establecido en el Punto cuarto de *los Lineamientos para la Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su registro*, aprobados por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG617/2012, de treinta de agosto de dos mil doce, los Partidos Políticos Nacionales debían capturar en el *Sistema de Cómputo desarrollado por la Unidad Técnica de Servicios de Informática*, los datos de todos sus afiliados en el periodo comprendido **entre el uno de abril de dos mil trece y el treinta y uno de marzo de dos mil catorce**, siendo que precisamente el registro realizado en ese periodo corresponden las más recientes fechas de alta de los quejosos en el *PRI*.

Ello es así, toda vez que si al momento de la comisión de algunas de las presuntas faltas se encontraba vigente el *COFIPE*,¹⁵ es claro que este ordenamiento legal debe aplicarse para las cuestiones sustantivas que así resulten, al margen que las faltas pudieran haber sido advertidas por los quejosos y cuestionadas mediante ciertas quejas que dieron origen al presente asunto, una vez que dicha norma fue abrogada por la *LGIPE*, así como que este último ordenamiento sea fundamento para cuestiones procesales o adjetivas.

Asimismo, para los ciudadanos de los que no se tiene la fecha de afiliación, se tomará en cuenta, aquella en la que éstos presentaron sus respectivos escritos de queja.

Lo anterior, de acuerdo con el criterio adoptado por el Consejo General en la Resolución INE/CG30/2018, misma que fue confirmada el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho por la Sala Superior del Tribunal Electoral al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-18/2018, **en el sentido de que al ser imposible establecer la fecha precisa en que se realizó la afiliación al instituto político, se tomaría la de presentación de la denuncia, porque era la única sobre la que se tenía certeza respecto a esa situación.**

Hipótesis que, en algunos casos del presente asunto se actualiza, en razón de que de lo manifestado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto en desahogo del requerimiento que le fue formulado y ante la omisión del *PRI*, no es posible advertir la fecha de la supuesta afiliación de los denunciantes.

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO

1. LITIS

En el presente asunto se deberá determinar si el *PRI* afilió indebidamente o no a los ciudadanos que alegan no haber dado su consentimiento para estar en sus filas, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo

¹⁵ El COFIPE estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce.

segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u), de la *LGPP*.

2. MARCO NORMATIVO

A) Constitución, tratados internacionales y ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: ...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

...

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la *Constitución Federal*, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos

políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33, de la *Constitución*.

Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafilarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 24/2002 emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES**.¹⁶

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación* de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,¹⁷ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación* de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos

¹⁶ Consultable en la página: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

¹⁷ Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes —asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación

política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

Artículo 23. *Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:*

I...

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito

para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;
- Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
- Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGIPE*, que es obligación de

los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *H. Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su constitución y registro.

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.

- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las

etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la *Constitución* y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de

documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna del PRI

Estatutos del PRI

De la Integración del Partido

Artículo 22. *El Partido Revolucionario Institucional está integrado por ciudadanos mexicanos, hombres y mujeres, que se afilien individual y libremente y suscriban los Documentos Básicos del Partido. Los integrantes individuales del Partido podrán incorporarse libremente a las organizaciones de los sectores, organizaciones nacionales y adherentes.*

Sección 1. De las personas afiliadas.

Artículo 23. *El Partido establece entre sus integrantes las siguientes categorías, conforme a las actividades y las responsabilidades que desarrollen:*

I. Miembros, a las personas ciudadanas, hombres y mujeres, en pleno goce de sus derechos políticos, afiliados al Partido;

II. Militantes, a las y los afiliados que desempeñen en forma sistemática y reglamentada las obligaciones partidarias;

III. Cuadros, a quienes con motivo de su militancia:

a) Hayan desempeñado cargos de dirigencia en el Partido, sus sectores, organizaciones nacionales y adherentes.

b) Hayan sido candidatas o candidatos del Partido, propietarias o propietarios y suplentes, a cargos de elección popular.

c) Sean o hayan asumido la representación del Partido o de sus candidatas o candidatos ante los órganos electorales, casillas federales, de la entidad federativa, distritales, municipales o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JAEL/CG/103/2018

d) Hayan egresado de las instituciones de capacitación política del Partido, o de los centros especializados de los sectores, organizaciones nacionales y adherentes, y desempeñado comisiones partidistas.

e) Desempeñen o hayan desempeñado un cargo de responsabilidad política, dentro de los diferentes órganos de dirección del Partido o en sus organizaciones en los diversos niveles de su estructura.

f) Participen de manera formal y regular durante las campañas electorales de las candidatas y los candidatos postulados por el Partido.

g) Quienes hayan participado en asambleas y convenciones del Partido; o

h) Las y los directivos de las fundaciones y de los organismos especializados y sus antecedentes; y

IV. Dirigentes, a los integrantes:

a) De los órganos de dirección deliberativos, previstos en las fracciones I, II, III, VII y VIII del artículo 66;

b) De los órganos de dirección ejecutivos, previstos en las fracciones IV y XI del artículo 66;

c) De los órganos de defensoría y jurisdiccionales, previstos en las fracciones V, VI, IX y X del artículo 66; y

d) De los órganos de representación territorial previstos en la fracción XII del artículo 66 y el párrafo segundo del artículo 55. El Partido registrará ante las autoridades competentes a las y los integrantes de los órganos de dirección ejecutivos. El Partido asegurará la igualdad de derechos y obligaciones entre sus integrantes, con las excepciones y limitaciones que impongan las leyes en cuanto al ejercicio de derechos políticos y las salvedades que establecen los presentes Estatutos y el Código de Ética Partidaria. Las relaciones de las personas afiliadas entre sí se regirán por los principios de igualdad de derechos y obligaciones que les correspondan, así como por los principios de la ética partidaria.

Artículo 24. *Independientemente de las categorías a que hace referencia el artículo anterior, el Partido reconoce como simpatizantes a las personas ciudadanas no afiliadas que se interesan y participan en sus programas y actividades. Las y los simpatizantes tendrán los siguientes derechos:*

I. Solicitar su afiliación como miembros del Partido;

II. Participar de los beneficios sociales, culturales y recreativos derivados de los programas del Partido;

III. Ejercer su derecho a voto, por las y los candidatos o dirigentes del Partido, cuando las convocatorias respectivas así lo consideren;

y IV. Aquéllos que le reconozcan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados de derechos humanos de los que sea parte el Estado mexicano.

[...]

Capítulo V De los Mecanismos de Afiliación

Artículo 54. *Podrán afiliarse al Partido Revolucionario Institucional los ciudadanos mexicanos, hombres y mujeres, que personal, pacífica, libre e individualmente, y en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Legislación Electoral vigente y estos Estatutos, expresen su voluntad de integrarse al Partido, comprometiéndose con su ideología y haciendo suyos los Documentos Básicos.*

Artículo 55. *La afiliación al Partido se hará ante la sección en cuya demarcación se encuentre el domicilio del solicitante o ante el comité municipal o delegacional, estatal o nacional correspondiente o en los módulos itinerantes o temporales establecidos para tal fin, así como en Internet, quienes notificarán al órgano partidista superior para que se incluya en el Registro Partidario, refiriendo al afiliado al seccional de su domicilio, como ámbito para el desarrollo de sus actividades políticas y electorales.*

Una vez afiliado, el Partido otorgará al ciudadano la credencial y documento que acredite su calidad de miembro. En tratándose de reafiliación de aquéllos que hayan salido del Partido en forma voluntaria o de afiliación al mismo de quien provenga de otro partido político, la Comisión de Justicia Partidaria que corresponda deberá hacer la declaratoria respectiva una vez que el interesado acredite haber cumplido con el proceso de capacitación ideológica.

La dirigencia del Partido, en todos sus niveles, mantendrá programas permanentes de afiliación y credencialización.

Artículo 56. *Podrán afiliarse al Partido Revolucionario Institucional los hombres y las mujeres con ciudadanía mexicana, que personal, pacífica, libre e individualmente, y en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Legislación Electoral vigente y estos Estatutos, expresen su voluntad de integrarse al Partido, comprometiéndose con su ideología y haciendo suyos los Documentos Básicos.*

Artículo 57. *La persona que desee afiliarse al Partido podrá hacerlo ante el Comité Seccional, el Comité Municipal o el Comité de la demarcación territorial en el caso de la Ciudad de México, que correspondan a su domicilio. También podrá hacerlo ante el*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JAEL/CG/103/2018

Comité Directivo de la entidad federativa donde resida, o ante el Comité Ejecutivo Nacional. De igual forma podrá afiliarse en los módulos itinerantes o temporales que se establezcan. La instancia del Partido que reciba la afiliación lo notificará al órgano superior competente para la inclusión del nuevo miembro en el Registro Partidario y, en su caso, referirá a la afiliada o el afiliado al Comité Seccional de su domicilio, como ámbito para el desarrollo de sus actividades políticas y electorales.

El Partido establecerá el servicio de reafiliación en su página electrónica, que el solicitante deberá completar en cualquiera de los Comités referidos en el párrafo anterior.

Una vez cumplido lo anterior, el Partido otorgará la credencial y documento que acredite su afiliación.

Tratándose de la reafiliación de quienes hayan salido del Partido en forma voluntaria o de afiliación al mismo de quien provenga de otro partido político, se seguirá el procedimiento previsto por el Código de Ética Partidaria.

La dirigencia del Partido, en todos sus niveles, mantendrá programas permanentes de afiliación y credencialización.

CÓDIGO DE JUSTICIA PARTIDARIA DEL PRI

De la Declaratoria de Renuncia

Artículo 120. Los militantes que renuncien voluntariamente al Partido, deberán hacerlo por escrito dirigido a la Comisión de Justicia Partidaria de la entidad federativa en que radique, solicitando la declaratoria respectiva.

Artículo 121. La Comisión de Justicia Estatal o del Distrito Federal según corresponda, sustanciará la solicitud, otorgando un término de diez días hábiles para que sea ratificada o retirada. De no comparecer en dicho plazo, se tendrá por no interpuesto el escrito de solicitud de renuncia.

Artículo 122. Los miembros del Partido que soliciten la declaratoria de la pérdida de militancia prevista en el artículo 63 de los Estatutos, deberán cumplir los siguientes requisitos:

- I. Presentar su solicitud por escrito donde se haga constar nombre y firma del solicitante, nombre y domicilio de la o el militante denunciado, la narración de los hechos que se evidencian relacionados con las hipótesis del citado artículo 63; y*
- II. Acompañar las pruebas con las que pretenda demostrar las imputaciones. En los casos a que se refieren las fracciones II y III del artículo 63 de los Estatutos, cuando se trate de hechos públicos y notorios, bastará la solicitud que formule la*

Secretaría Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria para que ésta emita la declaratoria de la pérdida de militancia. Todo procedimiento que se instaure para la instrucción de la solicitud de pérdida de militancia, se sujetará a las reglas contenidas en el Libro Cuarto, Título Primero de este ordenamiento.

Artículo 123. Una vez emitida la declaratoria correspondiente, será notificada al interesado y, para los efectos procedentes, a la Comisión Nacional y a la Secretaría de Organización del Comité Nacional, Directivo o del Distrito Federal respectivo.

D) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

3. CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante del *PRI*, por regla general debe acudir a las instancias partidistas competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.

En consecuencia, los partidos políticos (en el caso el *PRI*) tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del *COFIPE*, precepto que, derivado de la reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la *LGPP*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que además los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la *Constitución*, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y voluntaria.

- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la *Sala Superior*, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**,¹⁸ donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia 21/2013, de rubro **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,¹⁹ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria²⁰ y como estándar probatorio.²¹

¹⁸ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

¹⁹ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.

²⁰ Tesis de Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

²¹ Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. Véase la nota 35.

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación²² ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la *Sala Superior* consideró en la sentencia referida, que para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciante sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

²² Véanse las tesis *PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA*, *PRESUNCIÓN DE INOCENCIA*, así como *DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO*.

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con fundamento en el diverso 441 de la *LGPE*, lo que implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento ordinario sancionador una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo

acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberadamente la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se

genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

4. HECHOS ACREDITADOS Y PRECISIONES

Como se ha mencionado, las denuncias presentadas por los afectados versan sobre la supuesta violación a su derecho de libertad de afiliación, al ser incorporados al padrón del *PRI*, sin su consentimiento, así como la utilización de sus datos personales por dicho partido político para sustentar tal afiliación.

Ahora bien, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de la infracción denunciada, debe precisarse lo siguiente:

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
1	Jane Arely Espinosa Lessciur	02/abril/2018	Correo electrónico de 26 de abril de 2018, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, donde informa que la ciudadana se afilió al PRI el 05/08/2014 y se canceló su registro el 20/04/2018.	Oficio PRI/REP-INE/334/2018, firmado por el representante suplente del PRI ante el Consejo General, a través del cual remitió la información proporcionada por el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político, en la cual se establece que Jane Arely Espinosa Lessciur, sí se encontraba afiliada al mencionado ente jurídico, pero renunció a su militancia. Anexó declaratoria de renuncia.
Conclusiones A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del <i>PRI</i> , y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida.				

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JAEL/CG/103/2018

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
2	José de Jesús Franco López	29/marzo/2018	Correo electrónico de 26 de abril de 2018, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, donde informa que el ciudadano sí se encuentra afiliado al PRI	Oficios PRI/REP-INE/334/2018, PRI/REP-INE/0369/2018, PRI/REP-INE/0452/2018 y PRI/REP-INE/0536/2018, firmados por el representante suplente del PRI ante el Consejo General, a través del cual envió la información remitida por el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político, en los cuales no se proporcionó información alguna respecto a la afiliación de José de Jesús Franco López , al partido político en cita.
Conclusiones A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del <i>PRI</i> , y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida.				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
3	Martha Araceli López Molina	29/marzo/2018	Correo electrónico de 26 de abril de 2018, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, donde informa que el ciudadana sí se encuentra afiliado al PRI	Oficios PRI/REP-INE/334/2018, PRI/REP-INE/0369/2018, PRI/REP-INE/0452/2018 y PRI/REP-INE/0536/2018, firmados por el representante suplente del PRI ante el Consejo General, a través del cual envió la información remitida por el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político, en los cuales no se proporcionó información alguna respecto a la afiliación de Martha Araceli López Molina , al partido político en cita.
Conclusiones A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del <i>PRI</i> , y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida.				

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JAEL/CG/103/2018

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
4	Eleazar Zuñiga Mendoza	02/abril/2018	Correo electrónico de 26 de abril de 2018, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, donde informa que el ciudadano sí se encuentra afiliado al PRI	Oficios PRI/REP-INE/334/2018, PRI/REP-INE/0369/2018, PRI/REP-INE/0452/2018 y PRI/REP-INE/0536/2018, firmados por el representante suplente del PRI ante el Consejo General, a través del cual envió la información remitida por el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político, en los cuales no se proporcionó información alguna respecto a la afiliación de Eleazar Zuñiga Mendoza, al partido político en cita.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del <i>PRI</i>, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
5	Ana Rebeca Figueroa Cruz	02/abril/2018	Correo electrónico de 26 de abril de 2018, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, donde informa que el ciudadana sí se encuentra afiliado al PRI	Oficios PRI/REP-INE/334/2018, PRI/REP-INE/0369/2018, PRI/REP-INE/0452/2018 y PRI/REP-INE/0536/2018, firmados por el representante suplente del PRI ante el Consejo General, a través del cual envió la información remitida por el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político, en los cuales no se proporcionó información alguna respecto a la afiliación de Ana Rebeca Figueroa Cruz, al partido político en cita.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del <i>PRI</i>, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida.</p>				

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JAEL/CG/103/2018

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
6	Christian Iván Olivares Avalos	28/marzo/2018	Correo electrónico de 26 de abril de 2018, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, donde informa que el ciudadano sí se encuentra afiliado al PRI	Oficios PRI/REP-INE/334/2018, PRI/REP-INE/0369/2018, PRI/REP-INE/0452/2018 y PRI/REP-INE/0536/2018, firmados por el representante suplente del PRI ante el Consejo General, a través del cual envió la información remitida por el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político, en los cuales no se proporcionó información alguna respecto a la afiliación de Christian Iván Olivares Avalos, al partido político en cita.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del <i>PRI</i>, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
7	María Nancy Rubín Domínguez	26/marzo/2018	Correo electrónico de 26 de abril de 2018, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, donde informa que el ciudadana sí se encuentra afiliado al PRI	Oficio PRI/REP-INE/369/2018, firmado por el representante suplente del PRI ante el Consejo General, a través del cual remitió la información proporcionada por el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político, en la cual se establece que María Nancy Rubín Domínguez, sí se encontraba afiliada al mencionado ente jurídico, pero renunció a su militancia. Anexó declaratoria de renuncia.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del <i>PRI</i>, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida.</p>				

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JAEL/CG/103/2018

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
8	Mónica Isabel Montaña Sánchez	05/abril/2018	Correo electrónico de 26 de abril de 2018, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, donde informa que el ciudadana sí se encuentra afiliado al PRI	Oficios PRI/REP-INE/334/2018, PRI/REP-INE/0369/2018, PRI/REP-INE/0452/2018 y PRI/REP-INE/0536/2018, firmados por el representante suplente del PRI ante el Consejo General, a través del cual envió la información remitida por el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político, en los cuales no se proporcionó información alguna respecto a la afiliación de Mónica Isabel Montaña Sánchez, al partido político en cita.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del <i>PRI</i>, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
9	Juan Carlos Ayala Vega	05/abril/2018	Correo electrónico de 26 de abril de 2018, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, donde informa que el ciudadano sí se encuentra afiliado al PRI	Oficios PRI/REP-INE/334/2018, PRI/REP-INE/0369/2018, PRI/REP-INE/0452/2018 y PRI/REP-INE/0536/2018, firmados por el representante suplente del PRI ante el Consejo General, a través del cual envió la información remitida por el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político, en los cuales no se proporcionó información alguna respecto a la afiliación de Juan Carlos Ayala Vega, al partido político en cita.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del <i>PRI</i>, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida.</p>				

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JAEL/CG/103/2018

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
10	Adán Felipe Felipe	03/abril/2018	Correo electrónico de 26 de abril de 2018, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, donde informa que el ciudadano sí se encuentra afiliado al PRI	Oficios PRI/REP-INE/334/2018, PRI/REP-INE/0369/2018, PRI/REP-INE/0452/2018 y PRI/REP-INE/0536/2018, firmados por el representante suplente del PRI ante el Consejo General, a través del cual envió la información remitida por el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político, en los cuales no se proporcionó información alguna respecto a la afiliación de Adán Felipe Felipe, al partido político en cita.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del <i>PRI</i>, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
11	Claudia Esmeralda Reyes Márquez	03/abril/2018	Correo electrónico de 26 de abril de 2018, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, donde informa que el ciudadana sí se encuentra afiliado al PRI	Oficios PRI/REP-INE/334/2018, PRI/REP-INE/0369/2018, PRI/REP-INE/0452/2018 y PRI/REP-INE/0536/2018, firmados por el representante suplente del PRI ante el Consejo General, a través del cual envió la información remitida por el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político, en los cuales no se proporcionó información alguna respecto a la afiliación de Claudia Esmeralda Reyes Márquez, al partido político en cita.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del <i>PRI</i>, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida.</p>				

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JAEL/CG/103/2018

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
12	Olga Odilia Ríos Salazar	03/abril/2018	Correo electrónico de 26 de abril de 2018, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, donde informa que el ciudadana sí se encuentra afiliado al PRI	Oficios PRI/REP-INE/334/2018, PRI/REP-INE/0369/2018, PRI/REP-INE/0452/2018 y PRI/REP-INE/0536/2018, firmados por el representante suplente del PRI ante el Consejo General, a través del cual envió la información remitida por el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político, en los cuales no se proporcionó información alguna respecto a la afiliación de Olga Odilia Ríos Salazar, al partido político en cita.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del <i>PRI</i>, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
13	Erika Flores Linares	04/abril/2018	Correo electrónico de 26 de abril de 2018, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, donde informa que la ciudadana se afilió al PRI el 12/10/2010 y se canceló su registro el 17/04/2018.	Oficio PRI/REP-INE/334/2018, firmado por el representante suplente del PRI ante el Consejo General, a través del cual remitió la información proporcionada por el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político, en la cual se establece que Erika Flores Linares, sí se encontraba afiliada al mencionado ente jurídico, pero renunció a su militancia. Anexó declaratoria de renuncia.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del <i>PRI</i>, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida.</p>				

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JAEL/CG/103/2018

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
14	Nancy Alejandra Torres Gutiérrez	13/abril/2018	Correo electrónico de 26 de abril de 2018, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, donde informa que el ciudadana sí se encuentra afiliado al PRI	Oficio PRI/REP-INE/369/2018, firmado por el representante suplente del PRI ante el Consejo General, a través del cual remitió la información proporcionada por el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político, en la cual se establece que la quejosa, sí se encontraba afiliada al mencionado ente jurídico, pero renunció a su militancia. Anexó declaratoria de renuncia, así como copia de la cédula de afiliación.
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir un documento idóneo aportado por el <i>PRI</i> , en tanto que únicamente ofreció como prueba copia simple de la cédula de afiliación, se concluye que se trata de una afiliación indebida.				

Las constancias aportadas por la *DEPPP*, al ser documentos generados en ejercicio de sus atribuciones se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del Reglamento de Quejas, mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la *LGIPE* y 27, párrafo 2 del Reglamento citado tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran controvertidas ni desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

Por otra parte, las documentales allegadas al expediente por el partido político denunciado, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracción II del *Reglamento Quejas* y, por tanto, por sí mismas carecen de valor probatorio pleno; sin embargo, podrán generar plena convicción en esta autoridad, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio; ello, al tenor de los artículos 462, párrafo 3 de la *LGIPE*, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención.

5. CASO CONCRETO

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por los quejosos, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5, del *COFIPE*, cuyo contenido

se replica en el artículo 458, párrafo 5, de la *LG/PE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; esto es, partido político, candidato o inclusive cualquier persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De esta forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

En tal sentido, por cuanto hace a la existencia del supuesto normativo, debe reiterarse, como se estableció en apartados previos, que desde hace décadas está reconocido en la legislación de este país, la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, y de igual manera, que las personas en este país tienen el derecho de que se proteja su información privada y sus datos personales, todo lo cual está previsto desde el nivel constitucional.

En el caso, si bien en el marco normativo se hace referencia a los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, identificados con el número de resolución CG617/2012 y, de igual manera se transcribe la parte de disposiciones estatutarias

del partido político denunciado, relacionada con el procedimiento de afiliación, lo cierto es que, por el carácter constitucional de tales derechos, la existencia de los mismos —y las obligaciones correlativas a éstos—, no está condicionada al reconocimiento por parte de los sujetos obligados, en este caso, de los partidos políticos.

En otras palabras, si la libertad de afiliación política, en todas sus vertientes, es un derecho de los ciudadanos de este país desde hace varios decenios, resulta por demás evidente que las obligaciones de los partidos políticos que deriven de esta garantía -respetar la libertad de afiliación y, de ser necesario, acreditar que la incorporación a cada instituto político- no debe estar sujeta o condicionada a que éstos establezcan en sus normas internas disposiciones encaminadas a su protección, es decir, no depende, del momento en el que los partidos políticos hayan incluido en sus normas internas la obligación de que la afiliación sea voluntaria.

Por cuanto hace al elemento subjetivo señalado líneas arriba, debe destacarse que, la autoridad, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

En principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento que formula en contra de la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde al quejoso.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441, de la *LGPE*.

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que contaba con el consentimiento de los quejosos para afiliarlos a su partido político, y no a los ciudadanos que negaron haber solicitado su inclusión en el padrón de militantes.

Como vimos, en el apartado anterior, está demostrado a partir de la información proporcionada por la *DEPPP* que los ciudadanos denunciantes, se encontraron, en ese momento, como afiliados del *PRI*.

Por otra parte, en los casos que comprenden el presente procedimiento, el *PRI* no demuestra con medios de prueba, que la afiliación respectiva fue el resultado de la manifestación de la voluntad libre e individual de los ciudadanos, en los cuales *motu proprio*, expresaron su consentimiento y, por ende, proporcionaron sus datos personales a fin de llevar a cabo la afiliación a dicho instituto político.

Así pues, en estos casos la carga de la prueba corresponde al *PRI*, en tanto que el dicho de los actores consiste en afirmar que no dieron su consentimiento para ser afiliados, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba; en tanto que el partido político, cuya defensa consiste básicamente en afirmar que sí cumplieron las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación, tienen el deber de probar esa situación.

Ahora bien, tal y como quedó de manifiesto apartados arriba, **la libertad de afiliación en materia político-electoral, es un derecho reconocido y así garantizado para todo ciudadano de nuestro país**, al menos desde hace varias décadas, tanto a nivel constitucional como legal, **el cual es concebido como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido político, permanecer afiliado a éste, desafilarse e, incluso, no pertenecer a ninguno.**

Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección de datos personales e información relacionada con la vida privada de las personas, es igualmente un derecho con una trayectoria de protección por demás lejana.

En este sentido, la garantía y protección a los citados derechos, evidentemente no deriva de disposiciones reglamentarias al interior de los institutos políticos, que prevean como obligación del partido político la conservación de los expedientes de afiliación de cada miembro, ni tampoco a partir de la emisión de los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, emitidos por el propio IFE ahora INE en la Resolución CG617/2012, sino que, como se vio, el derecho tutelado deviene de disposiciones de rango supremo, el cual debe ser tutelado en todo momento, y no a partir de normas internas o reglamentarias que así lo establezcan.

En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos políticos, en todas sus vertientes, es un derecho de los ciudadanos previsto como garantía constitucional, también lo es la obligación de los partidos políticos de preservar, y en su caso, de demostrar, en todo momento, que cualquier acto que engendre la voluntad de un ciudadano para formar parte en las filas de un instituto político, o bien, ya no pertenecer a estos, deben estar amparados en el o los documentos que demuestren indefectiblemente el acto previo del consentimiento – para los casos en que se aduce no mediar consentimiento previo para ser afiliados- siendo **ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no se tiene o tenía el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes**, o –para el caso de la omisión de atender solicitudes de desafiliación- demostrar que dieron cauce legal a las solicitudes de desafiliación de manera pronta y oportuna y, que derivado de ello, ya no se encuentran en sus registros de militantes.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la

máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior, incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que en su defensa se deben presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

Con base en todo lo expuesto, toda vez que los denunciantes manifiestan no haber otorgado su consentimiento para ser agremiados al partido; que está comprobada la afiliación de todos, y que el *PRI*, no cumplió su carga para demostrar que la afiliación sí se solicitó voluntariamente, tal y como se expondrá más adelante, **esta autoridad electoral considera que existe una vulneración al derecho de afiliación de los quejosos y que, intrínsecamente, para la configuración de esa falta, se utilizaron sin autorización sus datos personales**, lo cual, debe ser considerado para la imposición de la sanción que, en cada caso, amerite.

En este sentido, el estudio de fondo del presente asunto se realizará en dos apartados, uno por cuanto hace a la ciudadana Nancy Alejandra Torres Gutiérrez, de quien se tiene evidencia en autos que se afiliaron de manera voluntaria al *PRI*, y; por otra parte, aquellos que fueron afiliados indebidamente, al partido político denunciado, es decir, sin mediar su consentimiento previo para ello.

CIUDADANOS DE QUIENES EL *PRI* CONCULCÓ SU DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN, EN SU MODALIDAD POSITIVA —INDEBIDA AFILIACIÓN—

Como quedó evidenciado, en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, está demostrado, a partir de la información proporcionada por la *DEPPP* y el propio instituto político denunciado, que los quejosos se encuentran o se encontraron, en algún momento afiliados del *PRI*.

Asimismo, es importante recalcar que el *PRI*, únicamente admitió la afiliación de Nancy Alejandra Torres Gutiérrez, mientras que por lo que hace a Jane Arely Espinosa Lessciur, María Nancy Rubín Domínguez y Erika Flores Linares, si bien, no afirmó que se encontraban afiliados al ente político en cita, sí precisó que las ciudadanas en comento renunciaron a su militancia, de lo cual, se deriva que para poder solicitar su cancelación tuvieron que estar afiliadas al mismo; por último, debe señalarse que respecto a José de Jesús Franco López, Martha Araceli López Molina, Eleazar Zuñiga Mendoza, Ana Rebeca Figueroa Cruz, Christian Iván Olivares Avalos, Mónica Isabel Montaña Sánchez, Juan Carlos Ayala Vega, Adán Felipe Felipe, Claudia Esmeralda Reyes Márquez y Olga Odilia Ríos Salazar, no admitió ni negó la militancia de estos, únicamente se limitó a señalar que continuaba en la búsqueda de la información relacionada con los mismos.

En ese sentido, el *PRI*, no demuestra con medios de prueba mínimos e idóneos, que la afiliación respectiva sea el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de los ciudadanos, en los cuales, ellos mismos, *motu proprio*, expresaron su consentimiento y, por ende, proporcionaron sus datos personales a fin de llevar a cabo la afiliación a dicho instituto político.

Al respecto, se debe recordar que, para el caso que nos ocupa, la carga de la prueba en torno a la acreditación de la voluntad de los quejosos referente a su incorporación a las filas del partido corresponde al *PRI*, en tanto que el dicho de los actores consiste en sostener que no dieron su consentimiento para ser afiliados, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba; por lo tanto, los partidos políticos, cuya defensa consiste básicamente en afirmar que sí cumplieron las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación, tienen el deber de probar esa situación.

Precisado lo anterior, se procede al análisis de los casos particulares, conforme a lo siguiente:

a) Casos en los que el PRI no se pronunció sobre la afiliación de los ciudadanos.

Dentro de este supuesto se encuentran José de Jesús Franco López, Martha Araceli López Molina, Eleazar Zuñiga Mendoza, Ana Rebeca Figueroa Cruz, Christian Iván Olivares Avalos, Mónica Isabel Montaña Sánchez, Juan Carlos Ayala Vega, Adán Felipe Felipe, Claudia Esmeralda Reyes Márquez y Olga Odilia Ríos Salazar, sobre los cuales el partido político denunciado fue omiso en pronunciarse respecto a su afiliación, argumentando que derivado de los tiempos electorales en que se encontraban y las cargas de trabajo, continuaban en la búsqueda de la información relacionada con los ciudadanos en cita, sin admitir o negar que los mismos fueran sus militantes, sin embargo, tenía y tiene la obligación de verificar, revisar y constatar fehacientemente que estos otorgaron, de forma personal, libre y voluntaria, su intención de afiliarse a sus filas, a través de los respectivos documentos y formatos en los que se constara y probara ese hecho.

En ese sentido, debe precisarse que el partido político en comento tiene el deber de **conservar y resguardar** con el debido cuidado y, para el caso, **exhibir**, la documentación soporte en la que conste la afiliación libre y voluntaria de sus militantes o afiliados, puesto que, se insiste, le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Por lo que, es válido concluir que el *PRI* no demostró que la afiliación de los diez ciudadanos, cuyo caso se analiza en este apartado, se realizó a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que dichos denunciados hayan dado su consentimiento libre para ser afiliados.

Ello, en virtud de que su normativa interna, específicamente el *Reglamento para la Afiliación y del Registro Partidario*, establece lo siguiente:

- El artículo 14, refiere que los documentos que deberá presentar el ciudadano para poder afiliarse al *PRI* son, credencial para votar, comprobante de domicilio y el formato de afiliación al partido, mismo que deberá ser proporcionado por la instancia correspondiente que conozca de la afiliación.
- Por su parte el numeral 15, establece que las Secretarías de Organización de los Comités Directivos Estatales y Nacional a través de sus instancias correspondientes de Afiliación y Registro Partidario **llevarán el control del registro** de todos y cada uno de los solicitantes de afiliación al partido; asimismo, llevará un folio consecutivo para las solicitudes de afiliación.
- Finalmente, el precepto 16 de dicho ordenamiento partidista prevé que la afiliación al partido se solicitará mediante el **formato Único de Afiliación al Registro Partidario** que autorice la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, o mediante escrito, en español, en el que deberán señalarse elementos como domicilio, la manifestación bajo protesta de decir verdad su voluntad de pertenecer al partido, de suscribirse, cumplir y hacer cumplir los documentos básicos del mismo y sus Estatutos, así como anexar escrito de no pertenencia a diverso ente político, debiendo llevar, además, **el nombre completo y firma autógrafa o huella dactilar** en original del ciudadano solicitante.

Con base en lo anterior, es claro que el *PRI* establece ciertos requisitos específicos de afiliación para acreditar la manifestación libre, voluntaria y previa de la persona, de entre las que destacan, el folio que deberían llevar las respectivas instancias partidistas, así como la suscripción de diversos formatos, incluyendo el formato único de afiliación al registro partidario correspondiente; lo anterior, a fin de dotar de certeza respecto de la voluntad libre y sin presión de quienes deseen ser inscritos; requisitos mismos que, en el caso que se analiza no fueron cumplidos por el denunciado, tal y como lo establece su propia legislación interna.

b) Casos en los que el PRI indicó que los ciudadanos si se encuentran afiliados y proporcionó copia simple de la cédula de afiliación.

En este supuesto se encuentra Nancy Alejandra Torres Gutiérrez, respecto de la cual, el *PRI*, exhibió **copia simple** del *formato único de afiliación y actualización al registro partidario*, con firma autógrafa de quien, presuntamente, lo suscribió.

No obstante, en concepto de esta autoridad electoral, dicho medio de prueba es insuficiente para sustentar la debida afiliación de la denunciante en cita, toda vez que la copia simple del formato antes referido no acredita la manifestación de la voluntad de la quejosa, pues el hecho de tratarse de una mera copia fotostática, impide demostrar la libre afiliación de la ciudadana, al no constituir un medio probatorio idóneo y tratarse un mero indicio que, por sí mismo, no genera convicción de los hechos que se pretenden acreditar.

Esto es, el denunciado no presentó algún otro elemento probatorio idóneo para acreditar que sí existió la voluntad de Nancy Alejandra Torres Gutiérrez, de pertenecer a las filas de ese ente político, como lo sería, el original o copia certificada del *formato único de afiliación y actualización al registro partidario* correspondiente o, en su caso, cualquier otro documento que diera certeza a dicho medio de prueba, como lo serían, por ejemplo, documentales que evidenciaran el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas, el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras; ello, a pesar de las diversas oportunidades que tuvo durante la secuela procesal que integran el procedimiento administrativo sancionador citado al rubro, lo que de suyo, permite colegir que existe un allanamiento tácito del denunciado a lo referido por la quejosa.

Por tanto, es válido concluir que los elementos probatorios aportados por el denunciado, consistentes en copia simple de los *formatos únicos de afiliación y actualización al registro partidario* de la ciudadana cuyo caso aquí se estudia, no es suficiente ni idóneo para acreditar que medió el consentimiento expreso de ésta para querer pertenecer a la lista de afiliados del *PRI*.

En efecto, en el caso que se analiza, el *PRI* presentó copia simple del documento antes referido, para demostrar la debida afiliación de Sandra Liliana Núñez Rodríguez y Beatriz Eugenia Ortega Pineda, lo cual, de suyo constituye una prueba documental privada, en términos de lo dispuesto en los artículos 461, párrafo 3, inciso b) de la *LGIPE* y 22, párrafo 1, fracción II, del *Reglamento de Quejas*.

En tal virtud, dichas documentales no se consideran suficientes para tener por demostrada la voluntad de la quejosa de afiliarse al referido ente político, sino únicamente generan un indicio singular y aislado de lo que pretende probar el denunciado, toda vez que el *PRI* no proporcionó los documentos originales atinentes o algún otro que diera certeza probatoria a las copias simples, inclusive, tal y como se precisó en el apartado que antecede, dicho partido político tuvo la opción de aportar los documentos que, en el caso, debió aportar la ciudadana para afiliarse o el folio que en su caso generara la oficina correspondiente, pero no lo hizo.

Con base en lo expuesto, se considera que no debe concederse valor y eficacia probatoria alguna a la citada documental, ya que, con independencia de las razones expuestas en los párrafos que preceden, esta autoridad debe privilegiar y garantizar el derecho de libertad de afiliación en favor de la ciudadana denunciante, toda vez que el partido político, al tratarse de un ente de interés público, tiene la obligación de acreditar con la documentación idónea la debida afiliación de las denunciantes.

En ese sentido, los partidos políticos como entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral; por tanto, están obligados a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que las afiliaciones que realizan, deben ser de manera libre, voluntaria y personal y, como consecuencia de ello, **conservar y resguardar** y, en su caso, **exhibir** la documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho.

Por tanto, se encuentran compelidos a acreditar con las pruebas idóneas y correctas que las afiliaciones se realizaron conforme a las disposiciones legales y estatutarias, pues precisamente corresponde al oferente y más, tratándose de una institución

política, acompañarla con los elementos suficientes para su perfeccionamiento y consiguiente valor legal.

Siendo menester señalar que, con la documental aludida se dio vista a la denunciante, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación a éste; no obstante, fue omisa en responder a tal solicitud; sin embargo, no debe pasar por desapercibido que dicha quejosa fue contundente y categórica en manifestar en su escrito inicial de queja, que jamás dio su consentimiento para ser enlistada en el padrón de afiliados del denunciado.

Por tanto, se reitera que con la prueba presentada por el denunciado, no es dable concluir que existe la certeza que medió la voluntad de la ciudadana de querer pertenecer a filas del *PRI*, al tratarse de un indicio singular y aislado que no se encuentra corroborado por algún otro medio de prueba; por lo que es claro que sólo puede arrojar indicios en torno a la veracidad de lo afirmado por el ente de interés público, incapaz de corroborar su afirmación en torno a que la afiliación de la quejosa a las filas del instituto político estuvo precedida de una manifestación de voluntad libre y auténtica.

En mérito de todo lo expuesto, se colige que existe evidencia que hace suponer que la transgresión al derecho de libre afiliación, en su modalidad positiva —afiliación indebida— a la que se refiere en este apartado, fue producto de una acción ilegal por parte del *PRI*.

A similar conclusión arribó este Consejo General en la resolución INE/CG1211/2018, de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/IJS/CG/37/2017, derivado de una falta de la misma naturaleza a la que aquí se estudia, en la que se determinó que dichas documentales no se consideran suficientes para tener por demostrada la voluntad de los quejosos de afiliarse a un ente político, sino únicamente generan un indicio singular y aislado de lo que pretende probar el denunciado.

c) Casos en los que el PRI indicó que los ciudadanos renunciaron a su militancia, pero no acreditó la debida afiliación de las quejas.

En este supuesto se encuentran María Nancy Rubín Domínguez, Erika Flores Linares y Jane Arely Espinosa Lessciur, ciudadanas que, según el *PRI*, solicitaron su renuncia a dicho partido político.

Ahora bien, para acreditar la renuncia de las ciudadanas en cita, el partido político mediante oficios PRI/REP-INE/0334/2018 y PRI/REP-INE/0369/2018, proporcionó copia simple de las resoluciones de cuatro, seis y nueve de abril de dos mil dieciocho, emitidas por la Comisión Estatal de Justicia Partidaria, a través de las cuales dio de baja del padrón de afiliados a las personas en comento, situación que en modo alguno, exime al multicitado ente político de su obligación de acreditar que las quejas fueron afiliadas bajo su consentimiento.

En efecto, la *litis* materia del presente procedimiento administrativo sancionador se concentra en dilucidar si las ciudadanas quejas fueron afiliadas indebidamente o no al *PRI*, por lo que, el hecho de que el instituto político en comento aduzca que María Nancy Rubín Domínguez, Erika Flores Linares y Jane Arely Espinosa Lessciur, solicitaron su baja del padrón de militantes y ésta se concedió por parte del órgano partidista correspondiente, en nada abona para esclarecer la controversia planteada por las denunciantes.

Además, debe precisarse que si bien, el *PRI* aportó como una de sus pruebas, la resolución mediante la cual se dio de baja del padrón de afiliados a las quejas en cita, lo cierto es que, no ofreció ningún documento donde se hiciera constar que las ciudadanas en comento hubieren estado afiliadas de forma voluntaria al mismo, de ahí que a ningún efecto jurídico trascienda dicha cuestión.

Ello es así, ya que el *PRI* no demuestra con medios de prueba idóneos, que la afiliación respectiva sea el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de las ciudadanas, en los cuales, ellas mismos, *motu proprio*, expresaron su consentimiento y, por ende, proporcionaron sus datos personales a fin de llevar a cabo la afiliación a dicho instituto político.

En conclusión, este órgano colegiado considera pertinente declarar **fundado** el presente procedimiento, pues se concluye que el *PRI* infringió las disposiciones electorales tendentes a demostrar la libre afiliación, en su modalidad positiva —afiliación indebida—, de los **catorce ciudadanos** referidos en los incisos anteriores, quienes aparecieron como afiliados a dicho instituto político, por no demostrar el **ACTO VOLITIVO** de los mismos para ser agremiados a ese partido.

En efecto, como se demostró anteriormente, los denunciantes que aparecieron afiliados al *PRI*, manifestaron que en momento alguno otorgaron su consentimiento para ello, siendo que dicho instituto político en ningún caso demostró lo contrario, por lo que se actualiza la violación al derecho fundamental de libre afiliación garantizado desde la Constitución y la ley, según se expuso.

Lo anterior, en tanto que el *PRI* no demostró que la afiliación se realizó a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que dichos ciudadanos hayan dado su consentimiento para ser afiliados, ni mucho menos que hayan permitido o entregado datos personales para ese fin, los cuales se estiman necesarios para procesar la afiliación, dado que estos elementos se constituyen como insumos obligados para, en su momento, llevar a cabo una afiliación, de ahí que esto sea necesario e inescindible.

Con base en ello, ante la negativa de los quejosos de haberse afiliado al *PRI*, correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de pruebas idóneas, que la afiliación se llevó a cabo a través de los mecanismos legales para ello, en donde constara fehacientemente la libre voluntad de los promoventes, lo que no hizo, siendo que el solo hecho de aparecer en su registro electrónico es insuficiente para acreditar el ejercicio libre, personal y voluntario del derecho de afiliación a ese ente.

Es decir, no basta con que los quejosos aparezcan como afiliados al *PRI* en sus registros electrónicos, sino que dicho instituto político debió demostrar, con documentación soporte o pruebas idóneas, que dicha afiliación se realizó de forma libre o voluntaria, o bien, que la aparición del nombre y datos de los quejosos en su padrón de militantes, fue consecuencia de un error involuntario o de alguna circunstancia diversa, pero no lo hizo.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JAEL/CG/103/2018

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación al *PR* implica, además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que pudiera haber servido de base o justificación al partido político para afiliar a los ahora quejosos.

Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales, tiene íntima vinculación con la indebida afiliación de los quejosos, lo cual ya quedó debidamente acreditado y, como consecuencia de ello, merece la imposición de las sanciones que se determinarán en el apartado correspondiente.

Cabe referir que a similar conclusión arribó este Consejo General en la resolución INE/CG120/2018, de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/ALC/CG/39/2017, así como en la resolución INE/CG/448/2018, de once de mayo de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2018, las cuales fueron confirmadas por el *Tribunal Electoral* al dictar sentencia el veintiocho de abril y once de mayo de dos mil dieciocho, en los medios de impugnación con clave SUP-RAP-047/2018²³ y SUP-RAP-137/2018²⁴, respectivamente, derivado de una falta de la misma naturaleza a la que aquí se estudia, en la que se determinó que el uso de datos personales poseía un carácter intrínseco o elemento esencial para la configuración de una afiliación indebida.

Ahora bien, más allá de la determinación de responsabilidad del partido político y, en el caso, de la consecuente imposición de sanción, esta autoridad debe tutelar el derecho fundamental de afiliación de los **catorce denunciantes**, es decir, estamos frente a la defensa de un derecho humano de naturaleza político-electoral, que en

²³ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/informacion_jurisdiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0047-2018.pdf

²⁴ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/informacion_jurisdiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0137-2018.pdf

términos del artículo 1° de la Constitución Federal debe ser respetado, protegido y garantizado por todas las autoridades del Estado Mexicano.

En ese sentido, resulta indudable que la intención de dichos denunciantes es **no** pertenecer más como afiliados al *PRI*.

Con base en ello, toda vez que la voluntad de José de Jesús Franco López, Martha Araceli López Molina, Eleazar Zuñiga Mendoza, Ana Rebeca Figueroa Cruz, Christian Iván Olivares Avalos, María Nancy Rubín Domínguez, Mónica Isabel Montaña Sánchez, Juan Carlos Ayala Vega, Adán Felipe Felipe, Claudia Esmeralda Reyes Márquez, Olga Odilia Ríos Salazar y Nancy Alejandra Torres Gutiérrez, partes **denunciantes** es no pertenecer a este partido político, se ordena al *PRI*, para que, en el supuesto que los quejosos continúen en su padrón de afiliados, **sin mayor trámite**, cancele el registro de cada uno de ellos como sus militantes, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentaron sus escritos de renuncia o sus respectivas denuncias y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, las pruebas que amparen el cumplimiento.

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017, de cinco de enero de dos mil diecisiete, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el INE, que lo vincule con un instituto político en particular.

Por lo que hace a Erika Flores Linares y Jane Arely Espinosa Lessciur, debe mencionarse que el *PRI*, mediante oficio PRI/REP-INE/0334/2018, informó que las ciudadanas en comento, fueron dadas de baja del padrón de afiliados del partido político en cita, a través de las resoluciones emitidas por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria el seis y el nueve de abril de dos mil dieciocho, respectivamente, circunstancia que fue corroborada por la *DEPPP*, al establecer que dichas personas

cuentan con registro de cancelación al ente político de referencia, en fechas diecisiete y veinte de del mes y año en curso.

CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de las faltas denunciadas, así como la responsabilidad por parte del partido político denunciado, en los casos detallados en el considerando que antecede, procede ahora determinar la sanción correspondiente, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 355, párrafo 5 del *COFIPE*, cuyo contenido se reproduce en el diverso 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, relativo a la gravedad de la responsabilidad en que se incurra; el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; y, en su caso, la reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.

En relación con ello, el *Tribunal Electoral* ha sostenido que para individualizar la sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción electoral.

1. Calificación de la falta

A) Tipo de infracción

Partido	Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
<i>PRI</i>	La infracción se cometió por una acción del partido político denunciado, que transgrede disposiciones de la <i>Constitución</i> y del <i>COFIPE</i> , en el momento de su comisión.	La conducta fue la afiliación indebida y el uso no autorizado de los datos personales de 14 ciudadanos por parte del <i>PRI</i> .	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la <i>Constitución</i> ; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2; 341, párrafo 1, inciso a), 342, párrafo 1, incisos a) y n) y 354, párrafo

Partido	Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
			1, inciso a), del <i>COFIPE</i> ; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la <i>LGIPE</i> ; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), t) y u) de la <i>LGPP</i> .

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o prohibidas.

En el presente asunto, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el caso concreto, se acreditó que el *PRI* incluyó o mantuvo indebidamente en su padrón de afiliados, a catorce ciudadanos, sin demostrar que para incorporarlos medió la voluntad de éstos de inscribirse, violentando con ello lo establecido en los artículos 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; y 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e) del *COFIPE*; 443, párrafo 1, incisos a) y n); de la *LGIPE*, y 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *LGPP*.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de los ciudadanos mexicanos, de optar libremente por ser o no militantes de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, efectivamente consintieron libremente en ser agremiados a los distintos partidos políticos.

Por otra parte, como se analizó, para los casos en que no se demostró la voluntad de pertenecer como afiliados al *PRI*, se observa un uso indebido de datos personales, que a la postre debe ser sancionado por esta autoridad.

Lo anterior, ya que lógicamente se utilizaron datos personales como lo son, al menos el nombre y la clave de elector de cada uno de los ciudadanos para ser afiliados, lo cual ocurrió en contra de su voluntad, de ahí que el uso de sus datos personales se constituya como un elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida.

De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción correspondiente al *PRI*.

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que el *PRI* transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la normativa interna del partido político, y que, tal infracción se cometió en detrimento de los derechos de **catorce** ciudadanos, esta situación no conlleva a estar en presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de afiliación al instituto político denunciado, quien incluyó en su padrón de militantes a los quejosos, sin demostrar el consentimiento previo para ello.

Caber precisar, que en apartados subsecuentes se analizará a detalle el impacto que tuvo dicha infracción, en atención al número de personas afiliadas indebidamente.

D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JAEL/CG/103/2018

a) Modo. En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles al *PRI*, consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *LGPP*, al incluir en su padrón de afiliados a **catorce ciudadanos**, sin tener la documentación soporte que acredite fehacientemente la voluntad de éstos de pertenecer, tal y como se advirtió a lo largo de la presente Resolución de forma pormenorizada

b) Tiempo. En el caso concreto, como se razonó en el considerando que antecede, por cuanto hace a las afiliaciones sin el consentimiento previo de los ciudadanos, acontecieron en diversos momentos, mismos que se resumen en la tabla siguiente:

No.	Nombre	Información partido político	Información DEPPP
1	Jane Arely Espinosa Lessciur	Renunció a su militancia, anexó copia de la declaratoria de renuncia	Tiene registro de cancelación. Se afilió el 05/08/2014 y se canceló su registro el 20/04/2018
2	José de Jesús Franco López	No proporcionó información del ciudadano	Se encuentra afiliado 08/07/1980
3	Martha Araceli López Molina	No proporcionó información del ciudadana	Se encuentra afiliada 10/05/1990
4	Eleazar Zuñiga Mendoza	No proporcionó información del ciudadana	Se encuentra afiliado
5	Ana Rebeca Figueroa Cruz	No proporcionó información del ciudadana	Se encuentra afiliada
6	Christian Iván Olivares Avalos	No proporcionó información del ciudadano	Se encuentra afiliado 21/10/2011
7	María Nancy Rubín Domínguez	Renunció a su militancia anexó copia de la declaratoria de renuncia	Se encuentra afiliada
8	Mónica Isabel Montaña Sánchez	No proporcionó información del ciudadana	Se encuentra afiliada
9	Juan Carlos Ayala Vega	No proporcionó información del ciudadano	Se encuentra afiliado
10	Adán Felipe Felipe	No proporcionó información del ciudadano	Se encuentra afiliado

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JAEL/CG/103/2018

No.	Nombre	Información partido político	Información DEPPP
11	Claudia Esmeralda Reyes Márquez	No proporcionó información del ciudadana	Se encuentra afiliada
12	Olga Odilia Ríos Salazar	No proporcionó información del ciudadana	Se encuentra afiliada
13	Erika Flores Linares	Renunció a su militancia anexó copia de la declaratoria de renuncia	Tiene registro de cancelación. Se afilió el 12/10/2010 y se canceló su registro el 17/04/2018
14	Nancy Alejandra Torres Gutiérrez	Si se encuentra afiliada, anexa copia de la cédula de afiliación 27/03/2014	Se encuentra afiliada 27/03/2014

Cabe precisar que la temporalidad que se tomará en cuenta para efectos de la presente Resolución en los casos en los que no se cuenta con una fecha cierta de afiliación, será la correspondiente a la fecha de presentación de sus respectivas quejas, en tanto que es la única fecha cierta que consta en el expediente, lo anterior, tal y como se precisó en el Considerando SEGUNDO de esta Resolución intitulado *NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO*.

- c) **Lugar.** Con base a la información proporcionada por la *DEPPP*, se deduce que las faltas atribuidas a los partidos políticos se cometieron de la siguiente manera:

No.	Nombre	Entidad federativa
1	Jane Arely Espinosa Lessciur	Quintana Roo
2	José de Jesús Franco López	Coahuila
3	Martha Araceli López Molina	Coahuila
4	Eleazar Zuñiga Mendoza	Michoacán
5	Ana Rebeca Figueroa Cruz	Baja California
6	Christian Iván Olivares Avalos	Jalisco
7	María Nancy Rubín Domínguez	Puebla
8	Mónica Isabel Montaña Sánchez	Baja California
9	Juan Carlos Ayala Vega	Baja California

No.	Nombre	Entidad federativa
10	Adán Felipe Felipe	Michoacán
11	Claudia Esmeralda Reyes Márquez	Michoacán
12	Olga Odilia Ríos Salazar	Nuevo León
13	Erika Flores Linares	Ciudad de México
14	Nancy Alejandra Torres Gutiérrez	Ciudad de México

E. Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Se considera que en el caso existe una conducta **dolosa** por parte del *PRI*, en violación a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la Constitución Federal; 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *LGPP*.

La falta se califica como **dolosa**, por lo siguiente:

- El *PRI* es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus constitucional de **entidad de interés público**, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Federal; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- El *PRI* está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la *LGPP*.

- El de libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
- La desafiliación a un partido político, es una modalidad del derecho fundamental de libre afiliación, por el cual un ciudadano elige libremente, en cualquier momento y sin restricción alguna de terceros, ya no pertenecer al mismo.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.
- Todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación o desafiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.
- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a) y e), de la *LGPP*.
- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria**.

- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición (para el caso de solicitudes de desafiliación), en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, es una violación de orden constitucional y legal que **requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento.**

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta se considera dolosa, porque:

- 1) Los quejosos aluden que no solicitaron voluntariamente, en momento alguno, su registro o incorporación como militantes al *PRI*; sin que dicha afirmación fuera desvirtuada.
- 2) Quedó acreditado que los quejosos se encuentran en el padrón de militantes del *PRI*, conforme a lo informado por la *DEPPP*, quien precisó que, derivado del padrón de militantes capturado por ese instituto político, con corte al treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, a efecto de demostrar que contaba con el número mínimo de afiliados para la conservación de su registro.
- 3) El partido político denunciado no demostró con las pruebas idóneas, que las afiliaciones de los quejosos se hubieran realizado a través de los mecanismos legales y partidarios conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y voluntaria de los denunciantes.

- 4) El partido denunciado no demostró ni probó que la afiliación de los quejosos fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun indiciaria, para estimar que la afiliación fue debida y apegada a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.

F. Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el *PRI*, se cometió al afiliar indebidamente a catorce ciudadanos, sin demostrar el acto volitivo de éstos para ingresar en sus padrones de militantes, así como de haber proporcionado sus datos personales para ese fin.

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en garantizar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, mediante la conservación de los documentos atinentes que permitan demostrar el acto de voluntad de los ciudadanos quejosos de militar en ese partido político.

2. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A) Reincidencia

Por cuanto a la **reincidencia** en que pudo haber incurrido el partido político, este organismo electoral autónomo considera que **no se actualiza**.

De conformidad con el artículo 355 párrafo 6 del *COFIPE*, cuyo contenido reproduce el diverso 458, párrafo 6 de la *LGIPE*, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el mencionado *Código*, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, la Sala Superior ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);
2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
3. Que en ejercicios anteriores el infractor **haya sido sancionado por esa infracción mediante Resolución o sentencia firme.**

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el *Tribunal Electoral*, a través de la Tesis de Jurisprudencia **41/2010**, de rubro ***REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.***²⁵

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con anterioridad.

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta.

En este sentido, debe precisarse que, en el presente asunto, no puede considerarse actualizado dicho supuesto por cuanto hace al *PRI*, pues en los archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya sancionado a este instituto político por faltas como la que se sanciona por esta vía, que se hayan dictado con anterioridad a los hechos materia de las presentes denuncias.

²⁵ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010>

B. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, y para cada partido político, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de los ciudadanos al partido político, pues se comprobó que el *PRI* los afilió sin demostrar, contar con la documentación soporte correspondiente, que medió la voluntad de éstos de pertenecer a la lista de agremiados de dicho instituto político.
- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, incluso en su modalidad de desafiliación, de optar por ser o no militante de algún partido político, y la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.

- Para materializar la indebida afiliación de los denunciantes, se utilizaron indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para formar el padrón de afiliados del *PRI*.
- No existió un beneficio por parte del partido denunciado, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral.
- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso Electoral.
- No existe reincidencia por parte del *PRI*.

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente **calificar la falta** en que incurrió el *PRI* como de **gravedad ordinaria**, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el partido denunciado dolosamente infringió el derecho de libre afiliación de los hoy quejosos, lo que constituye una violación al derecho fundamental de los ciudadanos reconocidos en la *Constitución*.

C. Sanción a imponer

Ahora bien, la mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción.

Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y

lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor entidad.²⁶

El artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIPE*, dispone el catálogo de sanciones a imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México; reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita; y en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la *Constitución* y de la *LGIPE*, con la cancelación de su registro como partido político.

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción (especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción acreditada), así como la conducta realizada por el *PR* se determina que debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la *LGIPE*, confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realicen una falta similar.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no

²⁶ Véase la tesis XXVIII/2003 de la Sala Superior, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.

resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que ni el *COFIPE*, ni la *LGIPE*, determinan pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo establecen las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

Asimismo, es importante tomar en cuenta el número de ciudadanos afiliados indebidamente al *PRI*, es decir, los **catorce ciudadanos**.

Con base en lo anterior, este *Consejo General* estima que, derivado de las circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida al *PRI*, justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, el cual se encuentra replicado en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGIPE*, consistente en una **MULTA unitaria por cuanto hace a cada ciudadano sobre quienes se cometió la falta acreditada**, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto.

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender

tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la sanción a imponer.

En este orden de ideas, es pertinente hacer notar, que ha sido criterio de esta autoridad, en la resolución INE/CG120/2018, de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/ALC/CG/39/2017, así como en la resolución INE/CG/448/2018, de once de mayo de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2018, las cuales fueron confirmadas por el *Tribunal Electoral* al dictar sentencia el veintiocho de abril y once de mayo de dos mil dieciocho, en los medios de impugnación con clave SUP-RAP-047/2018²⁷ y SUP-RAP-137/2018²⁸, respectivamente, en los que se sancionó por una indebida afiliación de un ciudadano, en cada caso, con una multa equivalente a 642 (seiscientos cuarenta y dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento de la comisión de la conducta, sanción que se estima debe tomarse como base para el presente asunto, si se considera que en dichos asuntos se demostró la comisión de una infracción similar a la que acontece en los casos que aquí se resuelven.

En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta causa, en específico **que no se refiere a la interposición de una sola queja** —a diferencia de lo que aconteció en los precedentes citados—, **sino de una multiplicidad de quejas y afiliaciones indebidas, las cuales han quedado acreditadas en autos**, es claro que la individualización de la sanción aplicada con motivo de la afiliación indebida de los ciudadanos al partido político denunciado, debe resultar proporcional al número de ciudadanos en cuyo perjuicio se cometió la falta, sin perder de vista las condiciones socioeconómicas de cada instituto político, y no simplemente, los hechos denunciados y acreditados en el presente procedimiento,

²⁷ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/informacion_jurisdiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0047-2018.pdf

²⁸ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/informacion_jurisdiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0137-2018.pdf

a fin de que la sanción que se imponga resulte efectivamente proporcional sin ser excesiva.

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad debe determinar su monto o cuantía, **tomando en cuenta** las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar de forma individual la multa que corresponda.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión que tiene sustento en la Tesis relevante **XXVIII/2003**,²⁹ emitida por el *Tribunal Electoral*, misma que a letra establece:

SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.- *En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de*

²⁹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JAEL/CG/103/2018

un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.

Ahora bien, a juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con base en lo dispuesto en la fracción II del numeral citado, lo procedente es imponer sendas **multas** equivalentes a **seiscientos cuarenta y dos** días de salario mínimo general para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) al *PRI*, **por cada uno de los ciudadanos que se acreditó fueron afiliados indebidamente** y que aparecen en su padrón de afiliados.

Cabe precisar que iguales sanciones, han sido impuestas por este Consejo General, al emitir diversas resoluciones que han resuelto procedimientos ordinarios sancionadores por indebidas afiliaciones y, que además han sido confirmadas por la *Sala Superior*, como son: INE/CG444/2018, confirmada a través del **SUP-RAP-138/2018**; INE/CG448/2018, confirmada en el **SUP-RAP-137/2018**; INE/CG446/2018, confirmada a través del **SUP-RAP-141/2018**, e INE/CG537/2018, confirmada en el **SUP-RAP-170/2018**, entre otras.

En virtud de que los ciudadanos denunciantes fueron afiliados en diferentes momentos, a fin de adoptar la postura más favorable para los partidos políticos y reducir a la mínima expresión posible el carácter represor con que actúa el estado en los procedimientos de tipo sancionador, es que, para el cálculo de la multa correspondiente, para el caso de **Jane Arely Espinosa Lessciur, José de Jesús Franco López, Martha Araceli López Molina, Christian Iván Olivares Avalos, Erika Flores Linares y Nancy Alejandra Torres Gutiérrez**, se debe tomar en cuenta el salario mínimo vigente al momento de realizar la afiliación y, obtenido el monto correspondiente, deberá hacerse la conversión a Unidades de Medida y Actualización.

Siendo que, para los casos de **Eleazar Zuñiga Mendoza, Ana Rebeca Figueroa Cruz, María Nancy Rubín Domínguez, Mónica Isabel Montaña Sánchez, Juan Carlos Ayala Vega, Adán Felipe Felipe, Claudia Esmeralda Reyes Márquez y Olga Odilia Ríos Salazar**, se aplicará directamente la Unidad de Medida y Actualización, vigente al momento en que presentaron su queja respectiva.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JAEL/CG/103/2018

Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia **10/2018**, emitida por el Tribunal Electoral, de rubro **MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN**.³⁰

Al respecto, es un hecho notorio que se invoca en términos de lo establecido en el artículo 461 de la *LGPE*, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fija anualmente los montos respectivos, mismos que al ser relacionados con las fechas de afiliación, para obtener la sanción que corresponde a cada partido político infractor, por cuanto a cada uno de los ciudadanos indebidamente afiliados, arrojan lo siguiente:

PRI			
Total de quejosos	Salario mínimo / UMA		Sanción a imponer
Afiliación en 1980			
1	Antiguos pesos 280	Nuevos pesos 0.28	\$179.76
Afiliación en 1990			
1	Antiguos pesos 11900	Nuevos pesos 11.90	\$7,639.8
Afiliación en 2010			
1	57.46		\$36,889.32
Afiliación en 2011			
1	59.82		\$38,404.44
Afiliación en 2014			
2	67.29		\$86,400.36
Afiliación en 2018			
8	\$80.60		\$413,961.6
TOTAL			\$583,475.28 [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].

Debe precisarse que en el caso de los ciudadanos cuya fecha de afiliación corresponde a mil novecientos ochenta y mil novecientos noventa, el salario mínimo utilizado como base para imponer la sanción correspondiente, se realizó atendiendo

³⁰ Consultable en la liga electrónica <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=UNIDAD,DE,MEDIDA,DE,ACTUALIZACI%C3%93N>

a los valores contenidos en el “cuadro histórico de salarios mínimos (1982-2018)³¹”, publicado por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), el cual, para dichos periodos contempla un monto fijado en antiguos pesos mexicanos, mismos a los que se realizó la conversión consistente en quitarle tres ceros a la cantidad establecida, para actualizarlos a nuevos pesos, tal y como se advierte del cuadro que antecede.

Lo anterior, atendiendo el “Decreto por el que se crea una nueva unidad del Sistema Monetario de los Estados Unidos Mexicanos³²”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y dos, en el cual, entre otras cosas, se determinó la creación de una nueva unidad del sistema monetario de los Estados Unidos Mexicanos equivalente a mil pesos actuales, mismo que a la fecha se encuentra vigente.

Ahora bien, debe puntualizarse que para el caso del ciudadano que se encuentra afiliado desde mil novecientos ochenta, se consideró como salario mínimo para imponer la sanción, el relativo a mil novecientos ochenta y dos, toda vez que el “cuadro histórico de salarios mínimos (1982-2018)”, solo abarca como histórico más antiguo a dicha anualidad.

Expuesto lo antes mencionado, la sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, pues sin ser gravosa, sí puede inhibir al *PRI*, para que en el futuro vigile el cumplimiento de las normas de la materia.

Ahora bien, es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la *Constitución* —efectuada por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones.

³¹ Consultable en la página de internet http://omawww.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_indicadores/Paginas/salarios_minimos.aspx

³² Consultable en la página de internet http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4673186&fecha=22/06/1992

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JAEL/CG/103/2018

En esas condiciones, para los casos de **Jane Arely Espinosa Lessciur, José de Jesús Franco López, Martha Araceli López Molina, Christian Iván Olivares Avalos, Erika Flores Linares y Nancy Alejandra Torres Gutiérrez**, lo procedente es transformar la sanción que se considera idónea, expresada en salarios mínimos, a Unidades de Medida y Actualización, para lo cual es necesario dividir el monto inicial (seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México multiplicado por el salario mínimo vigente en 1982, 1990, 2010, 2011, 2014 y 2018 según corresponda), entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, misma que equivale, para el ejercicio fiscal en curso a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.), resultando las siguientes cantidades:

No	Ciudadano	Fecha de afiliación	Multa impuesta en SMGV	Valor SMGV	Valor UMA vigente	Sanción en UMAS (A*B)/C ³³	SANCIÓN A IMPONER (C*D) ³⁴
			A	B	C	D	
1	Jane Arely Espinosa Lessciur	05/08/2014	642	\$67.29	\$80.60	535.98	\$43,199.98
2	José de Jesús Franco López	08/07/1980	642	\$0.28	\$80.60	2.23	\$179.73
3	Martha Araceli López Molina	10/05/1990	642	\$11.90	\$80.60	94.78	\$7,639.26
4	Christian Iván Olivares Avalos	21/10/2011	642	\$59.82	\$80.60	476.48	\$38,404.28
5	Erika Flores Linares	12/10/2010	642	\$57.46	\$80.60	457.68	\$36,889.00
6	Nancy Alejandra Torres Gutiérrez	27/03/2014	642	\$67.29	\$80.60	535.98	\$43,199.98
TOTAL						\$ 169,512.23	

Finalmente, para los ciudadanos de quienes se impone la sanción con base en la Unidad de Medida de Actualización vigente en 2018, corresponden las siguientes cantidades:

³³ Cifra al segundo decimal

³⁴ *Ídem*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JAEL/CG/103/2018

No.	Ciudadano	Fecha de afiliación	Multa impuesta en UMA	Valor UMA	SANCIÓN A IMPONER
1	Eleazar Zuñiga Mendoza	02/abril/2018	642	\$80.60	\$51,745.2
2	Ana Rebeca Figueroa Cruz	02/abril/2018	642	\$80.60	\$51,745.2
3	María Nancy Rubín Domínguez	26/marzo/2018	642	\$80.60	\$51,745.2
4	Mónica Isabel Montaña Sánchez	05/abril/2018	642	\$80.60	\$51,745.2
5	Juan Carlos Ayala Vega	05/abril/2018	642	\$80.60	\$51,745.2
6	Adán Felipe Felipe	03/abril/2018	642	\$80.60	\$51,745.2
7	Claudia Esmeralda Reyes Márquez	03/abril/2018	642	\$80.60	\$51,745.2
8	Olga Odilia Ríos Salazar	03/abril/2018	642	\$80.60	\$51,745.2
TOTAL			\$413,961.6		

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, pues sin ser gravosa, sí puede inhibir al *PRI*, para que en el futuro vigile el cumplimiento de las normas de la materia

D. El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la infracción

Se estima que la infracción cometida por parte del *PRI*, aun cuando causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de la infracción.

E. Las condiciones socioeconómicas del infractor

Sobre este punto, es preciso señalar que conforme al Acuerdo INE/CG339/2017, emitido por este *Consejo General* el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se estableció que, entre otros, el *PRI* recibiría mensualmente en el presente ejercicio, por concepto de financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes, la siguiente cantidad:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JAEL/CG/103/2018

SUJETO	Monto del financiamiento público para el sostenimiento de Actividades Ordinarias mensuales de 2018
PRI	\$91'241,389.00

Ahora bien, según fue informado por la *DEPPP*, a través del oficio **INE/DEPPP/DE/DPPF/5693/2018**, el monto de la ministración mensual correspondiente al mes de septiembre de dos mil dieciocho, debía ser ajustado en función de las sanciones administrativas pendientes de cubrir por dicho instituto político nacional, por lo cual la cifra total a recibir sería la siguiente:

SUJETO	IMPORTE DE LA MINISTRACIÓN DE MENSUAL DE 2018	IMPORTE TOTAL DE LAS SANCIONES SEPTIEMBRE 2018	IMPORTE DEL REINTEGRO DEL FINANCIAMIENTO LOCAL	IMPORTE NETO DE LA MINISTRACIÓN
PRI	\$91'241,389.00	\$45,620,694.00	\$0.00	\$45,620,695.00

F. Impacto en las actividades del sujeto infractor

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta al *PRI*, no es de carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida, respecto al monto del financiamiento que recibirá por concepto de actividades ordinarias permanentes en el mes de septiembre del año en curso, los siguientes porcentajes:

Año	Monto de la sanción por ciudadano	Ciudadanos que fueron indebidamente afiliados	% de la ministración mensual por ciudadano³⁵
1980	\$179.73	1	%0.0003
1990	\$7,639.26	1	%0.016
2010	\$36,889.00	1	%0.080
2011	\$38,404.28	1	%0.084
2014	\$43,199.98	2	%0.094
2018	\$51,745.2	8	%0.113

³⁵ Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.

Por consiguiente, la sanción impuesta al *PRI* no es de carácter gravoso, si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual correspondiente al mes de septiembre de este año.

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción cometida por el *PRI* (especialmente los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con el financiamiento que recibe del *INE* para el mes de septiembre de dos mil dieciocho, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político sancionado.

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el partido político de mérito —tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagar sin que ello afecte sus operaciones ordinarias, además de que las sanciones son proporcionales a las faltas cometidas y se estima que, sin resultar excesivas ni ruinosas, pueden generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la *Sala Superior* en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-250/2009,³⁶ es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

QUINTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE LOS QUEJOSOS COMO MILITANTES. En tal sentido, se tiene que la voluntad de los denunciantes es no pertenecer al *PRI*, por lo que se debe vincular al partido político, para que, de ser el caso, en el supuesto que los quejosos continúen en su padrón de militantes, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentó su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, los medios de prueba que amparen el cumplimiento.

³⁶ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://portal.te.gob.mx/coleccion/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm>

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017³⁷, de cinco de enero de dos mil diecisiete, en donde se concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político a la *DEPPP*, a fin de que en el ámbito de sus atribuciones procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el *INE*; que lo vincule con un instituto político en particular.

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la Constitución Federal,³⁸ se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el numeral 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara **fundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra del **Partido Revolucionario Institucional**, al infringir las disposiciones electorales del derecho de libre afiliación —en su modalidad positiva (afiliación indebida) — de **catorce ciudadanos**, en términos de lo establecido en el Considerando **TERCERO** de esta Resolución.

SEGUNDO. En términos del Considerando **TERCERO** de la presente Resolución, se impone al **Partido Revolucionario Institucional**, una multa por la **indebida afiliación de cada uno** de los **ciudadanos** aludidos, conforme a los montos que se indican a continuación:

³⁷ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/JDC/2/SUP_2017_JDC_2-626321.pdf

³⁸ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.**”

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JAEL/CG/103/2018

No.	Quejosa o Quejoso	Sanción a imponer
1	Jane Arely Espinosa Lessciur	535.98 (quinientos treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.98 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2014]
2	José de Jesús Franco López	2.23 (dos punto veintitrés) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$179.73 (ciento setenta y nueve pesos 73/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 1980]
3	Martha Araceli López Molina	94.78 (noventa y cuatro punto setenta y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$7,639.26 (siete mil seiscientos treinta y nueve pesos 26/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 1990]
4	Eleazar Zuñiga Mendoza	642 (seiscientos cuarenta y dos) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$51,745.2 (cincuenta y un mil setecientos cuarenta y cinco pesos 02/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2018]
5	Ana Rebeca Figueroa Cruz	642 (seiscientos cuarenta y dos) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$51,745.2 (cincuenta y un mil setecientos cuarenta y cinco pesos 02/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2018]
6	Christian Iván Olivares Avalos	476.48 (cuatrocientos setenta y seis punto cuarenta y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$38,404.28 (treinta y ocho mil cuatrocientos cuatro pesos 28/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2011]
7	María Nancy Rubín Domínguez	642 (seiscientos cuarenta y dos) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$51,745.2 (cincuenta y un mil setecientos cuarenta y cinco pesos 02/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2018]
8	Mónica Isabel Montaña Sánchez	642 (seiscientos cuarenta y dos) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$51,745.2 (cincuenta y un mil setecientos cuarenta y cinco pesos 02/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2018]

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JAEL/CG/103/2018

No.	Quejosa o Quejoso	Sanción a imponer
9	Juan Carlos Ayala Vega	642 (seiscientos cuarenta y dos) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$51,745.2 (cincuenta y un mil setecientos cuarenta y cinco pesos 02/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2018]
10	Adán Felipe Felipe	642 (seiscientos cuarenta y dos) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$51,745.2 (cincuenta y un mil setecientos cuarenta y cinco pesos 02/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2018]
11	Claudia Esmeralda Reyes Márquez	642 (seiscientos cuarenta y dos) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$51,745.2 (cincuenta y un mil setecientos cuarenta y cinco pesos 02/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2018]
12	Olga Odilia Ríos Salazar	642 (seiscientos cuarenta y dos) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$51,745.2 (cincuenta y un mil setecientos cuarenta y cinco pesos 02/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2018]
13	Erika Flores Linares	457.68 (cuatrocientos cincuenta y siete punto sesenta y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$36,889.32 (treinta y seis mil ochocientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2010]
14	Nancy Alejandra Torres Gutiérrez	535.98 (quinientos treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.98 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2014]

TERCERO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7 de la *LGIFE*, el monto de las multas impuestas **al PRI**, será deducido, según corresponda, de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dichos institutos políticos, una vez que esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su Considerando **SEXTO**.

CUARTO. Se vincula al *PRI* para que, de ser el caso, en el supuesto de que los quejosos continúen en su padrón de afiliados, **sin mayor trámite**, cancele su

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JAEL/CG/103/2018

registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentaron su escrito de denuncia y hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, las pruebas que amparen el cumplimiento, a fin de vigilar y corroborar el cumplimiento por parte del referido ente político, conforme a lo dispuesto en su Considerando **QUINTO**.

QUINTO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Notifíquese personalmente a los siguientes ciudadanos:

No.	Ciudadano
1	Jane Arely Espinosa Lessciur
2	José de Jesús Franco López
3	Martha Araceli López Molina
4	Eleazar Zuñiga Mendoza
5	Ana Rebeca Figueroa Cruz
6	Christian Iván Olivares Avalos
7	María Nancy Rubín Domínguez
8	Mónica Isabel Montaña Sánchez
9	Juan Carlos Ayala Vega
10	Adán Felipe Felipe
11	Claudia Esmeralda Reyes Márquez
12	Olga Odilia Ríos Salazar
13	Erika Flores Linares
14	Nancy Alejandra Torres Gutiérrez

Así como al partido *PRI* por conducto de su respectivo representante ante este *Consejo General*; y por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Ahora, someto a su consideración, en lo particular, en lo general los proyectos 1.6, 1.7, 1.10, 1.19 y 1.20. _____

Separando de esta votación, por lo que hace a la sanción disminuida y el criterio de reiteración, e incluyendo en el caso del apartado 1.10 los efectos de la baja, que eso podría ir en lo general, entiendo. _____

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban en lo general, los Proyectos de Resolución de Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificados en el orden del día como los apartados 1.6, 1.7, 1.10, 1.19, 1.20, considerando en el caso del apartado 1.10 esta votación en lo general, los efectos de la baja, como es el caso de los otros Proyectos y separando lo que hace al criterio de reiteración y la siguiente sanción disminuida, tomando en cuenta la fe de errata del apartado 1.10. _____

Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo general, sírvanse a manifestarlo. _____

Aprobados por unanimidad, en lo general (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello). _____

Ahora, someto a su consideración 2 votaciones en lo particular, lo que señala la Consejera Electoral Claudia Zavala criterio de reiteración y la sanción. _____

Primero en lo particular, por lo que hace en estos 5 proyectos al criterio de reiteración como viene en el Proyecto de Resolución. _____

Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo. _____

8 votos. _____

¿En contra? _____

3 votos. _____

Aprobado, el criterio de reiteración como viene en el Proyecto de Resolución por 8 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 3 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles). _____

Ahora, en estos 5 proyectos, por lo que hace al criterio de sanción disminuida, como viene en el Proyecto. _____

Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo. _____

8 votos. _____

¿En contra? _____

3 votos. _____

Aprobado, por 8 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 3 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez). _____

(Texto de las Resoluciones aprobadas INE/CG1245/2018, INE/CG1246/2018, INE/CG1247/2018, INE/CG1248/2018 e INE/CG1249/2018) Ptos. 1.6, 1.7, 1.10, 1.19 y 1.20 _____

INE/CG1245/2018

PROCEDIMIENTO **SANCIONADOR**
ORDINARIO
EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/JD04/CHS/35/2018
DENUNCIANTE: GERARDO SILVERIO
ENRÍQUEZ CASTELLANOS Y OTROS
CIUDADANOS
DENUNCIADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/JD04/CHS/35/2018 APERTURADO CON MOTIVO DE LAS QUEJAS PRESENTADAS ANTE ESTA AUTORIDAD ELECTORAL A TRAVÉS DE SENDOS OFICIOS SIGNADOS POR DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DE ESTE INSTITUTO EN DIVERSAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A TRAVÉS DE LOS CUALES HICIERON DEL CONOCIMIENTO DE ESTA AUTORIDAD, HECHOS PRESUNTAMENTE CONTRAVENTORES DE LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, RELACIONADOS CON LA APARICIÓN DE CIUDADANOS, ASPIRANTES AL CARGO DE SUPERVISORES ELECTORALES Y/O CAPACITADORES ASISTENTES ELECTORALES, QUE SE ENCONTRARON EN EL PADRÓN DEL PARTIDO POLÍTICO ACCIÓN NACIONAL PRESUNTAMENTE SIN SU CONSENTIMIENTO

Ciudad de México, 12 de septiembre de dos mil dieciocho.

GLOSARIO

<i>Comisión:</i>	La Comisión de Quejas y Denuncias del INE
<i>Consejo General:</i>	Consejo General del INE

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GSEC/JD04/CHS/35/2018

COFIPE o Código:	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Constitución:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DEPPP:	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE
DERFE:	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE
IFE:	El otrora Instituto Federal Electoral
Instituto o INE:	Instituto Nacional Electoral
Ley de Medios:	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
Ley de Partidos:	Ley General de Partidos Políticos
LGIPE:	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
PAN:	Partido Acción Nacional
Quejosos o denunciantes:	Gerardo Silverio Enríquez Castellanos, Leonardo Iván Galicia García, Juan Fernando Garza Vázquez, Mario Gómez López, Andrea Velázquez Jiménez, Artemio Rodríguez Bautista, Cecilia Margarita Cabral Cruz y Erika Jazmín Aguirre Gutiérrez.
Reglamento de Quejas:	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GSEC/JD04/CHS/35/2018

<i>Sala Superior:</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>UTCE:</i>	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE

R E S U L T A N D O

I. REGISTRO, ADMISIÓN, REQUERIMIENTOS Y RESERVA DE EMPLAZAMIENTO. Mediante acuerdo de dieciséis de febrero del año en curso,¹ el Titular de la *UTCE* instruyó la integración del expediente en que se actúa, el cual quedó registrado con la clave **UT/SCG/Q/GSEC/JD04/CHS/35/2018**, como un procedimiento sancionador ordinario por la presunta indebida afiliación y el uso indebido de datos personales para ese fin.

En el acuerdo en cita, se admitió a trámite el procedimiento de sanción señalado con anterioridad respecto a los ciudadanos siguientes:

No.	Nombre del quejoso
1	Leonardo Iván Galicia García
2	Juan Fernando Garza Vázquez
3	Mario Gómez López
4	Andrea Velázquez Jiménez
5	Artemio Rodríguez Bautista
6	Cecilia Margarita Cabral Cruz
7	Erika Jazmín Aguirre Gutiérrez

Por otro lado, mediante Acuerdo de veintiséis de febrero del año en curso, se admitió a trámite el presente procedimiento ordinario sancionador por lo que respecta al ciudadano **Gerardo Silverio Enríquez Castellanos**.

¹ Visible en las páginas 57 a 65 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GSEC/JD04/CHS/35/2018

En ambos acuerdos se ordenó reservar lo conducente respecto al emplazamiento, hasta en tanto fueran compiladas y analizadas las constancias que integrarían dicho expediente, y se determinara la pertinencia o no de la realización de nuevas diligencias de investigación.

Asimismo, se ordenó requerir a la *DEPPP*, a efecto de que informara si los ciudadanos se encontraban registrados dentro del Padrón de Afiliados del Partido Acción Nacional, así como al citado instituto político, para que proporcionaran información respecto de las afiliaciones detectadas.

II. EMPLAZAMIENTO. El seis de abril de dos mil dieciocho,² se ordenó el emplazamiento al *PAN*, para efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la conducta que se le imputó y aportara las pruebas que considerara pertinentes.

Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito.

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

EMPLAZAMIENTO				
CONSTANCIA CON LA CUAL SE MATERIALIZÓ LA DILIGENCIA	SUJETO EMPLAZADO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE CONTESTACIÓN AL EMPLAZAMIENTO	PRUEBAS OFRECIDAS
INE-UT/4147/2018 ³	PAN	Nueve de abril de dos mil dieciocho	Trece de abril de dos mil dieciocho	<p>El partido político denunciado formuló diversas manifestaciones.</p> <p>En relación a los ciudadanos Artemio Rodríguez Bautista, Cecilia Margarita Cabral Cruz y Erika Jazmín Aguirre Gutiérrez señaló la fecha de su registro y de actualización al padrón de afiliados.</p> <p>Por lo que respecta a Gerardo Silverio Enríquez Castellanos, precisó que no ha recibido escrito de renuncia.</p>

² Acuerdo visible en las páginas 199 a la 207 del expediente.

³ Visible en la página 209

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GSEC/JD04/CHS/35/2018

EMPLAZAMIENTO				
CONSTANCIA CON LA CUAL SE MATERIALIZÓ LA DILIGENCIA	SUJETO EMPLAZADO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE CONTESTACIÓN AL EMPLAZAMIENTO	PRUEBAS OFRECIDAS
				<p>En relación a Leonardo Iván Galicia García informó que es militante del PAN.</p> <p>Finalmente, por lo que hace a Juan Fernando Garza Vázquez, Mario Gómez López y Andrea Velázquez Jiménez, informó que causaron baja partir del quince de noviembre de dos mil diecisiete.</p>

III. ALEGATOS. El dieciocho de abril de dos mil dieciocho,⁴ se ordenó dar vista a las partes, a efecto de que en vía de alegatos manifestaran lo que a su derecho conviniera.

El acuerdo de vista para alegatos, se diligenció en los siguientes términos:

VISTA PARA ALEGATOS				
CONSTANCIA CON LA CUAL SE MATERIALIZÓ LA DILIGENCIA	SUJETO NOTIFICADO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE CONTESTACIÓN	OBSERVACIONES
INE-UT/4678/2018 ⁵	PAN	Veinte de abril de dos mil dieciocho	Veintiséis de abril de dos mil dieciocho	<p>El partido político denunciado formuló diversas manifestaciones.</p> <p>En relación a los ciudadanos Artemio Rodríguez Bautista, Cecilia Margarita Cabral Cruz y Erika Jazmín Aguirre Gutiérrez señaló la fecha de su registro y actualización al padrón de afiliados.</p> <p>Por lo que respecta a Gerardo Silverio Enríquez Castellanos, agregó que de este ciudadano no ha recibido escrito de renuncia.</p>

⁴ Visible en las páginas 229 a la 232 del expediente.

⁵ Visible en las páginas 236 a la 247 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GSEC/JD04/CHS/35/2018

VISTA PARA ALEGATOS				
CONSTANCIA CON LA CUAL SE MATERIALIZÓ LA DILIGENCIA	SUJETO NOTIFICADO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE CONTESTACIÓN	OBSERVACIONES
				En relación a Leonardo Iván Galicia García informó que es militante del PAN. Finalmente, por lo que hace a Juan Fernando Garza Vázquez, Mario Gómez López y Andrea Velázquez Jiménez, informó que causaron baja partir del quince de noviembre de dos mil diecisiete.
INE-JLE-MÉX/VS/562/2018 ⁶	Erika Jazmín Aguirre Gutiérrez	Diecinueve de abril de dos mil dieciocho	NO HUBO RESPUESTA	NO APLICA
INE-QROO/JDE/03/VS/0222/18 ⁷	Mario Gómez López	Diecinueve de abril de dos mil dieciocho	NO HUBO RESPUESTA	NO APLICA
INE/VS/JLE/NL/0971/2018 ⁸	Juan Fernando Garza Vázquez	Veinte de abril de dos mil dieciocho	NO HUBO RESPUESTA	NO APLICA
INE/JLE/VS/781/2018 ⁹	Leonardo Iván Galicia García	Veinticuatro de abril de dos mil dieciocho	NO HUBO RESPUESTA	NO APLICA
INE/CLTAB/CP/2410/2018 ¹⁰	Andrea Velázquez Jiménez	Treinta de abril de dos mil dieciocho	NO HUBO RESPUESTA	NO APLICA
INE/04/JDE/VS/136/2018 ¹¹	Gerardo Silverio Enríquez Castellanos	Veinte de abril de dos mil dieciocho	NO HUBO RESPUESTA	NO APLICA
INE-JDE03-ZAC/1006/2018 ¹²	Artemio Rodríguez Bautista	Cinco de junio de dos mil dieciocho	NO HUBO RESPUESTA	NO APLICA
INE-JDE03-ZAC/1006/2018 ¹³	Cecilia Margarita Cabral Cruz	Ocho de junio de dos mil dieciocho	NO HUBO RESPUESTA	NO APLICA

⁶ Visible en las páginas 253 a la 263 del expediente.

⁷ Visible en las páginas 264 a la 274 del expediente.

⁸ Visible en las páginas 275 a la 282 del expediente.

⁹ Visible en las páginas 283 a la 291 del expediente.

¹⁰ Visible en las páginas 292 a la 302 del expediente.

¹¹ Visible en las páginas 303 a la 308 del expediente.

¹² Visible en las páginas 309 a la 313 del expediente.

¹³ Visible en las páginas 314 a la 316 del expediente.

IV. ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, toda vez que no había diligencias pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la *Comisión*.

V. SESIÓN DE LA COMISIÓN. En la Octogésima Cuarta Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el seis de septiembre de dos mil dieciocho, la *Comisión* resolvió el presente proyecto, en lo general por unanimidad de votos de sus integrantes, y en lo particular, por mayoría de dos votos de la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela Herrera y del Consejero Electoral Benito Nacif Hernández, con el voto en contra de la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala Pérez, por cuanto a la individualización de la sanción, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *Ley de Partidos*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte del *PAN*, en perjuicio de los ciudadanos que han sido señalados a lo largo de la presente determinación.

Ahora bien, conforme al artículo 23 del *COFIPE*, los partidos políticos deben ajustar su conducta a las disposiciones establecidas en el citado *Código*, correspondiendo al otrora *IFE* —ahora *INE*— vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n); y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho *Código*, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38 del dispositivo legal en cita, las cuales son sancionables por el *Consejo General*.

Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443 párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la *LGIPE* y 25, de la *Ley de Partidos*, respectivamente.

En consecuencia, siendo atribución del máximo órgano de dirección del INE conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, esta autoridad resulta competente para conocer y resolver respecto de la presunta infracción denunciada, atribuida al *PAN*, derivada esencialmente, de la violación al derecho de libertad afiliación y utilización indebida de datos personales.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,¹⁴ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.

¹⁴ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GSEC/JD04/CHS/35/2018

- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de militantes.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIPE* —los cuales contienen reglas que ya se encontraban previstas en el *COFIPE*, en los artículos 342, párrafo 1, inciso a); 356, 361, 364, 365 y 366—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, segundo párrafo, de la *Constitución*, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO

De conformidad con las constancias que obran en el expediente, esta autoridad concluye que la legislación comicial aplicable para la resolución del fondo del asunto será el **COFIPE**, por lo que respecta a las quejas presentadas por los ciudadanos siguientes:

No.	Nombre	Fecha de afiliación
1	Leonardo Iván Galicia García	13/01/2014
2	Andrea Velázquez Jiménez	30/01/2005
3	Artemio Rodríguez Bautista	14/06/2011
4	Cecilia Margarita Cabral Cruz	30/05/2005
5	Erika Jazmín Aguirre Gutiérrez	08/01/2014

Toda vez que las presuntas faltas (indebida afiliación) se cometieron durante la vigencia del citado Código, puesto que en esos casos el registro o afiliación de los

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GSEC/JD04/CHS/35/2018

quejosos al *PAN* se realizaron antes del treinta y uno de marzo de dos mil catorce, fecha en la cual se encontraba vigente el citado instrumento legal.

En efecto, de conformidad con lo establecido en el Punto cuarto de los Lineamientos para la Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su registro, aprobados por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG617/2012, de treinta de agosto de dos mil doce, los Partidos Políticos Nacionales debían capturar en el *Sistema de Cómputo desarrollado por la Unidad Técnica de Servicios de Informática*, los datos de todos sus afiliados en el periodo comprendido **entre el uno de abril de dos mil trece y el treinta y uno de marzo de dos mil catorce**.

Por tanto, si al momento de la comisión de las presuntas faltas se encontraba vigente el *COFIPE*,¹⁵ es claro que este ordenamiento legal debe aplicarse para las cuestiones sustantivas del presente procedimiento, al margen que las faltas pudieran haber sido advertidas por los quejosos y cuestionadas mediante las quejas que dieron origen al presente asunto, una vez que dicha norma fue abrogada por la *LGIPE*, así como que este último ordenamiento sea fundamento para cuestiones procesales o adjetivas.

Ahora bien, por lo que respecta a los ciudadanos que se enlistan a continuación, se tiene que la fecha de afiliación al partido político denunciado —ya sea reconocida por el propio partido político o proporcionada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos— es posterior al veintitrés de mayo de dos mil catorce, de ahí que en esos casos, se aplicará la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para el análisis y sustanciación de esos supuestos que se denuncian en el presente expediente.

No.	Nombre	Fecha de afiliación
1	Juan Fernando Garza Vázquez	07/06/2014
2	Mario Gómez López	01/08/2014

¹⁵ El *COFIPE* estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce

Finamente, esa misma disposición aplicará respecto de **Gerardo Silverio Enríquez Castellanos**, en razón de que, dicho ciudadano, si bien no manifestó haber sido afiliado indebidamente, sí precisó haber solicitado su renuncia ante el partido político Acción Nacional sin que la misma hubiera sido atendida y, como se precisará más adelante, la fecha que se tendrá por cometida tal conducta, corresponde a la que presentó el escrito de queja, esto es, el diecinueve de enero de dos mil dieciocho.

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO

1. LITIS

En el presente asunto se debe determinar si el *PAN* violó el derecho de libertad de afiliación en su vertiente de afiliar indebidamente o no a los ciudadanos que alegan no haber dado su consentimiento para estar en sus filas, así como de no permitir o dar trámite a la solicitud de desafiliación presentada por un ciudadano, haciendo para ello uso ilegítimo de su información personal, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIFE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *Ley de Partidos*.

2. MARCO NORMATIVO

A) Constitución, tratados internacionales y ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: ...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

...

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no sólo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracción I, párrafo segundo, *in fine*, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*.

Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, *in fine*, de la *Constitución*, es un derecho fundamental

con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 24/2002 emitida por la *Sala Superior*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES.**

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,¹⁶ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre

¹⁶ Consultable en la página https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes — asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

Artículo 23. Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:

I...

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de

principios, programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;
- Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
- Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGIFE*, que es obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* del *IFE* por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *H. Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GSEC/JD04/CHS/35/2018

Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su constitución y registro.

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.
- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en

cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna del PAN

A efecto de tener claridad acerca del proceso que un ciudadano debe llevar a cabo para convertirse en militante del partido político ahora denunciado, se hace necesario analizar la norma interna del partido político, para lo cual, enseguida se transcribe la parte conducente de los Estatutos del PAN¹⁷

...

¹⁷ Consultados en el enlace electrónico <https://www.pan.org.mx/wp-content/uploads/downloads/2016/08/ESTATUTOS-GENERALES-XVIII-ASAMBLEA-NACIONAL-EXTRAORDINARIA.pdf>, el dieciocho de junio de dos mil dieciocho.

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS MILITANTES Y SIMPATIZANTES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
CAPÍTULO PRIMERO
DE LOS MILITANTES

Artículo 8

1. **Son militantes del Partido Acción Nacional**, los ciudadanos mexicanos que de forma directa, **personal**, presencial, **individual**, **libre**, pacífica y **voluntaria**, **manifiesten su deseo de afiliarse**, asuman como propios los principios, fines, objetivos y documentos básicos del Partido Acción Nacional, y sean aceptados con tal carácter.

...

Artículo 9

1. El procedimiento de afiliación se regirá conforme a lo previsto en el Reglamento correspondiente. **La solicitud se presentará por escrito y podrá realizarse ante cualquier Comité del Partido de la entidad federativa correspondiente**, independientemente donde se encuentre su domicilio. Los mexicanos residentes en el extranjero, se podrán afiliar fuera del territorio nacional.

2. En los casos en que se niegue el registro en la entidad, podrán realizar el procedimiento de afiliación, en el Registro Nacional de Militantes.

Artículo 10

1. Para ser militante, se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Ser ciudadano mexicano;
- b) Tener un modo honesto de vivir;
- c) Haber participado en la capacitación coordinada o avalada por el área correspondiente del Comité Ejecutivo Nacional;
- d) **Suscribir el formato aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional**, acompañando copia de su credencial para votar con fotografía vigente, emitida por el Instituto **Nacional** Electoral; en el caso de mexicanos que residan en el extranjero, podrán acompañar copia de la matrícula consular. En el formato se expresa la obligación de cumplir y respetar los principios de doctrina y documentos básicos de Acción Nacional y su compromiso de participar en forma activa y permanente en la realización de los fines, objetivos y actividades del Partido;

e) No estar afiliado a otro partido político ya sea nacional o local.

2. En caso de haber sido militante de otro partido político, deberá separarse de manera definitiva de dicho instituto político, por lo menos seis meses antes de solicitar su afiliación como militante.

3. La militancia en el Partido inicia a partir de la aceptación por el Registro Nacional de Militantes, quien verificará el cumplimiento de los requisitos antes mencionados. En caso de ser aceptado, la fecha de inicio de la militancia será a partir de la recepción de la solicitud de afiliación.

4. El militante se dará como aceptado, si en el plazo de sesenta días naturales, contados a partir de la entrega de la solicitud, no se emite pronunciamiento alguno por parte del Registro Nacional de Militantes.

Por su parte, el Reglamento de Militantes del Partido Acción Nacional establece:

TÍTULO SEGUNDO DEL PROCEDIMIENTO DE AFILIACIÓN

CAPÍTULO I DE LA AFILIACIÓN DE MILITANTES

Artículo 8. Toda ciudadana o ciudadano mexicano que desee afiliarse como militante al Partido, deberá hacerlo de forma individual, libre, pacífica, voluntaria, directa, presencial y personal; asumir como propios los Principios de Doctrina, fines y objetivos; así como los Programas de Acción Política, Plataformas políticas y electorales, Estatutos y Reglamentos.

Artículo 9. La militancia en el Partido inicia a partir de la aceptación por el Registro Nacional de Militantes, el que verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos por los Estatutos. Una vez aceptado, la fecha de inicio de la militancia será a partir de que la instancia competente hubiere recibido la solicitud de afiliación. Los Comités Directivos Estatales y Municipales, sólo aceptarán formatos a través de su Director de afiliación acreditado ante el Padrón Nacional de Estructuras, acompañados de los documentos completos y con los requisitos que establece el Artículo 10 de los Estatutos.

Artículo 12. Toda ciudadana o ciudadano mexicano que desee afiliarse al Partido en los términos del Estatuto y el presente Reglamento, se sujetará al procedimiento siguiente:

I. Llenará el formato electrónico de inscripción en el portal del Registro Nacional de Militantes. La inscripción generará un folio que será utilizado por el militante para la inscripción en el Taller de Introducción al Partido;

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GSEC/JD04/CHS/35/2018

II. Realizado el curso, reingresará al portal del Registro Nacional de Militantes para generar el formato de solicitud de afiliación, para lo cual deberá acudir de manera presencial y personal a cualquier Comité Directivo Municipal del Estado a que corresponda, o Comité Directivo Delegacional en el caso del Distrito Federal; o incluso a la respectiva sede del Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal;

III. El formato de solicitud de afiliación deberá acompañarse, al momento de la entrega, con fotocopias de los siguientes documentos, presentando los originales para cotejo:

a) Credencial para votar con fotografía vigente, expedida por la autoridad electoral nacional, para el efecto de acreditar la ciudadanía. Si dicha credencial no contiene el domicilio, el solicitante deberá anexar adicionalmente la copia de un comprobante de agua, luz, teléfono o gas, con una antigüedad no mayor a 4 meses, así como el original para cotejo; y

b) En su caso, copia de la renuncia a cualquier otro Partido Político en el que haya militado, presentada por lo menos seis meses antes de la fecha de solicitud de afiliación al Partido.

IV. El Comité Directivo receptor, a través de su Director de Afiliación, imprimirá la solicitud de afiliación y adjuntará en la PLATAFORMA PAN, la fotografía del solicitante, con los parámetros establecidos por el Registro Nacional de Militantes;

V. El órgano del Partido receptor de los documentos descritos en la fracción III, registrará y digitalizará, en la PLATAFORMA PAN, los datos contenidos en la solicitud del ciudadano, en un término máximo de 15 días naturales. Los Directores de afiliación acreditados ante el Padrón Nacional de Estructuras, estarán facultados para hacer entrega personal o por correo certificado o mensajería especializada a la instancia correspondiente, de las solicitudes de afiliación que reciban, en un término máximo de 15 días naturales a partir de dicha recepción. En el caso de que las estructuras municipales correspondientes no cuenten con los medios tecnológicos para llevar a cabo el procedimiento de adjuntar la documentación en la PLATAFORMA PAN, con independencia del registro de los datos del solicitante, remitirán la documentación al Director de Afiliación del Comité Directivo Estatal, dentro de los 10 días naturales a partir de que reciban las solicitudes de afiliación para su trámite conducente. Pasado este periodo, el solicitante deberá acudir al Comité Directivo Municipal receptor a efecto de obtener el comprobante impreso de su solicitud de afiliación; y

VI. El Director de afiliación receptor: recibirá, sellará y asentará su firma en el lugar establecido de la solicitud de afiliación, en caso de que se cumpla con los requisitos establecidos en el presente artículo; en caso contrario, prevendrá al solicitante y registrará, en la PLATAFORMA PAN, sus datos, así como la fecha y el motivo de la prevención.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GSEC/JD04/CHS/35/2018

De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente:

- Los ciudadanos que deseen afiliarse como militantes del PAN deben hacerlo de forma directa, **personal**, presencial, **individual**, **libre**, pacífica y **voluntaria** y asumir como propios los Principios de Doctrina, fines y objetivos; así como los Programas de Acción Política, Plataformas políticas y electorales, Estatutos y Reglamentos.
- Deben presentar su solicitud de afiliación por escrito ante cualquier Comité del *PAN* de la entidad federativa correspondiente, independientemente donde se encuentre su domicilio.
- Para ser militantes deben de cubrir ciertos requisitos, tales como: ser ciudadanos mexicanos, tener un modo honesto de vivir, haber participado en la capacitación que imparte el Comité Ejecutivo Nacional del *PAN*, suscribir el formato aprobado por el citado Comité al que deben anexar copia de credencial para votar y, finalmente, no estar afiliado a otro partido político.
- El procedimiento de afiliación inicia con el llenado del formato electrónico de inscripción en el portal de Registro Nacional de Militantes, la inscripción generará un folio utilizado por el militante para la inscripción en el Taller de Introducción al *PAN*.
- Una vez realizado el curso reingresará al Portal Nacional de Militantes para generar su solicitud de afiliación, la cual se debe presentar por escrito ante cualquier Comité del *PAN* de la entidad federativa correspondiente, independientemente donde se encuentre su domicilio. Al citado formato se debe anexar copia de la credencial de elector y en su caso, copia de la renuncia a cualquier otro partido político.
- El director de afiliación del Comité receptor de la solicitud la imprimirá y adjuntará en la Plataforma del *PAN* la fotografía del solicitante, así como los documentos referidos, en un término máximo de quince días naturales.
- Los directores de afiliación acreditados ante el Padrón Nacional de Estructuras están facultados para realizar la entrega personal, por correo certificado o mensajería de las solicitudes de afiliación que reciban a las

instancias correspondientes, en un término máximo de 15 días naturales a partir de la recepción.

- En caso de que las estructuras municipales no cuenten con los medios tecnológicos para adjuntar los documentos referidos a la Plataforma *PAN*, remitirán la documentación al Director de Afiliación del Comité Directivo Estatal, dentro de los 10 días naturales siguientes a la recepción de la solicitud.
- Pasado este periodo, el solicitante deberá acudir al Comité Directivo Municipal receptor a efecto de obtener el comprobante impreso de su solicitud de afiliación; y
- Una vez que el Director de afiliación receptor reciba la solicitud la sellará y asentará su firma en el lugar establecido de la solicitud de afiliación, en caso de que se cumpla con los requisitos establecidos en el presente artículo; en caso contrario, prevendrá al solicitante y registrará, en la PLATAFORMA *PAN*, sus datos, así como la fecha y el motivo de la prevención.
- El ciudadano se tiene por aceptado si transcurridos sesenta días naturales contados desde la entrega de la solicitud no se emite pronunciamiento alguno de parte del Registro Nacional de Militantes, quien se encargará de verificar el cumplimiento de los requisitos mencionados.

D) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

3. CARGA Y ESTANDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante del *PAN*, por regla general debe acudir a las instancias partidistas

competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso en particular el *PAM*), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del *COFIPE*, precepto que, derivado de la reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la *Ley de Partidos*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor

de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y voluntaria.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la Sala Superior, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**,¹⁸ donde estableció que la presunción de inocencia

¹⁸ http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Jurisprudencia 21/2013, de rubro: **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,¹⁹ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria²⁰ y como estándar probatorio²¹.

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación²² ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la Sala Superior consideró en la sentencia referida, que para superar la presunción de inocencia, en su

¹⁹ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60

²⁰ Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

²¹ Véase la jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. ²² Véase la nota 35.

²² Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO**.

vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la *Ley de Medios*, con fundamento en el diverso 441 de la *LGIPE*, lo que implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento ordinario sancionador una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la

prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino que conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya

desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

4. HECHOS ACREDITADOS Y PRECISIONES

Como se ha mencionado, las denuncias presentadas por los *quejosos*, versan, en algunos casos, sobre la supuesta violación a su derecho de libertad de afiliación, al ser incorporados al padrón del *PAN*, sin su consentimiento, así como la utilización de sus datos personales, por dicho partido político para sustentar tal afiliación, y en otro, en mantener a un ciudadano afiliado a dicho instituto político en contra de su voluntad, no obstante haber manifestado oportunamente su intención de no pertenecer más a las filas de ese partido político.

Ahora bien, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de la infracción denunciada, debe precisarse lo siguiente:

I. Afiliaciones respecto de las que el partido político denunciado no acreditó el consentimiento de los ciudadanos

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GSEC/JD04/CHS/35/2018

1. Leonardo Iván Galicia García

Leonardo Iván Galicia García		
Quejoso	Información proporcionada por la DEPPP ²³	Manifestaciones del Partido Político ²⁴
El denunciante manifiesta haber sido inscrito indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados del PAN.	Informó, que el denunciante está afiliado al Partido Acción Nacional desde el <u>trece de enero de dos mil catorce</u> .	Informó que el ciudadano se encuentra registrado como militante del Partido Acción Nacional desde el <u>trece de enero de dos mil catorce</u> , sin embargo, afirmó que no cuenta con la constancia de afiliación respectiva, toda vez que por acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete emitido por la Comisión de Afiliación del Consejo Nacional del PAN autorizó al Director del Registro Nacional de Militantes a destruir el archivo a su cargo hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis.
Observaciones		
El denunciante manifiesta que desconoce la afiliación al PAN, ya que en ningún momento ha dado ni firmado documentos.		
Conclusiones		
1.- El quejoso precisa que fue inscrito sin su consentimiento al padrón de afiliados del PAN 2.- La DEPPP informó que el quejoso apareció en el padrón de militantes del PAN. 3.- El PAN admitió que el quejoso se encuentra inscrito en su padrón de militantes, no obstante, no aportó elementos de prueba que comprobaran que el quejoso se afilió voluntariamente.		

²³ Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0291/2016 (Páginas 470 y 471)

²⁴ Oficio REP-PT-INE-PVG-762/2016 (Páginas 472 y 473)

2. Juan Fernando Garza Vázquez

Juan Fernando Garza Vázquez		
Quejoso	Información proporcionada por la DEPPP ²⁵	Manifestaciones del Partido Político ²⁶
El denunciante manifiesta haber sido inscrito indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados del PAN.	Informó, que el denunciante está afiliado al Partido Acción Nacional desde el <u>siete de junio de dos mil catorce.</u>	<p>Informó que el ciudadano <u>causó baja el quince de noviembre de dos mil diecisiete,</u> debido a la aplicación del Programa Específico de Revisión, Verificación, Actualización, Depuración y Registro de Huellas Digitales en Nuevo León, implementado por el Registro Nacional de Militantes en coordinación con la Comisión Especial Estratégica para la Transparencia y Reingeniería del Padrón de Militantes del PAN. Para lo cual anexa copia simple del citado programa.</p> <p>No obstante, no proporcionó la fecha de afiliación del ciudadano.</p>
Observaciones		
El denunciante manifiesta que al presentarse a la Junta Local de este Instituto en Nuevo León a efecto de entregar documentación para la convocatoria de promotor de la participación ciudadana se percató que está inscrito en el padrón de militantes del PAN, hecho que desconocía.		
Conclusiones		
<p>1.- El quejoso precisa que fue inscrito sin su consentimiento al padrón de afiliados del PAN</p> <p>2.- La DEPPP informó que el quejoso apareció en el padrón de militantes del PAN.</p> <p>3.- El PAN admitió que el quejoso fue dado de baja de su padrón de militantes, no obstante, no aportó elementos de prueba que comprobaran que el quejoso se afilió voluntariamente.</p>		

²⁵ Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0291/2016 (Páginas 470 y 471)

²⁶ Oficio REP-PT-INE-PVG-762/2016 (Páginas 472 y 473)

3. Mario Gómez López

Mario Gómez López		
Quejoso	Información proporcionada por la DEPPP ²⁷	Manifestaciones del Partido Político ²⁸
El denunciante manifiesta haber sido inscrito indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados del PAN.	Informó, que el denunciante está afiliado al Partido Acción Nacional desde el <u>uno de agosto de dos mil catorce.</u>	Informó que el ciudadano <u>causó baja el quince de noviembre de dos mil diecisiete,</u> debido a la aplicación del Programa Específico de Revisión, Verificación, Actualización, Depuración y Registro de Huellas Digitales en Quintana Roo, implementado por el Registro Nacional de Militantes en coordinación con la Comisión Especial Estratégica para la Transparencia y Reingeniería del Padrón de Militantes del PAN. Para lo cual anexa copia simple del referido acuerdo. No obstante, no proporcionó la fecha de afiliación del ciudadano.
Observaciones		
El denunciante manifiesta que solicitó su baja del padrón de militantes del PAN, no obstante, no ha sido atendida su petición.		
Conclusiones		
<p>1.- El quejoso precisa que fue inscrito sin su consentimiento al padrón de afiliados del PAN</p> <p>2.- La DEPPP informó que el quejoso apareció en el padrón de militantes del PAN.</p> <p>3.- El PAN admitió que el quejoso fue dado de baja de su padrón de militantes, no obstante, no aportó elementos de prueba que comprobaran que el quejoso se afilió voluntariamente.</p>		

²⁷ Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0291/2016 (Páginas 470 y 471)

²⁸ Oficio REP-PT-INE-PVG-762/2016 (Páginas 472 y 473)

4. Andrea Velázquez Jiménez

Andrea Velázquez Jiménez		
Quejoso	Información proporcionada por la DEPPP ²⁹	Manifestaciones del Partido Político ³⁰
La denunciante manifiesta haber sido inscrita indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados del PAN.	Informó, que la denunciante está afiliada al Partido Acción Nacional desde el <u>treinta de enero de dos mil cinco.</u>	Informó que la ciudadana <u>causó baja el quince de noviembre de dos mil diecisiete.</u> debido a la aplicación del Programa Específico de Revisión, Verificación, Actualización, Depuración y Registro de Huellas Digitales en Tabasco, implementado por el Registro Nacional de Militantes en coordinación con la Comisión Especial Estratégica para la Transparencia y Reingeniería del Padrón de Militantes del PAN. Para lo cual anexa copia simple del referido acuerdo. No obstante, no proporcionó la fecha de afiliación de la ciudadana.
Observaciones		
El denunciante manifiesta que desconocía su afiliación al padrón de militantes del PAN y que le notificaron esa situación en la Junta Distrital 05, de este Instituto en el Estado de Tabasco ya que se encuentra inscrita en el proceso de selección a supervisor electoral y capacitador electoral.		
Conclusiones		
<p>1.- El quejoso precisa que fue inscrito sin su consentimiento al padrón de afiliados del PAN</p> <p>2.- La DEPPP informó que el quejoso apareció en el padrón de militantes del PAN.</p> <p>3.- El PAN admitió que la quejosa fue dada de baja de su padrón de militantes, no obstante, no aportó elementos de prueba que comprobaran que la quejosa se afilió voluntariamente.</p>		

²⁹ Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0291/2016 (Páginas 470 y 471)

³⁰ Oficio REP-PT-INE-PVG-762/2016 (Páginas 472 y 473)

5. Artemio Rodríguez Bautista

Artemio Rodríguez Bautista		
Quejoso	Información proporcionada por la DEPPP ³¹	Manifestaciones del Partido Político ³²
El denunciante manifiesta haber sido inscrito indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados del PAN.	Informó, que la denunciante está afiliada al Partido Acción Nacional desde el <u>catorce de junio de dos mil once.</u>	Informó que el ciudadano se encuentra registrado como militante del Partido Acción Nacional desde el <u>catorce de junio de dos mil once</u> y que su trámite de actualización de datos se realizó el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, sin embargo, no aportó la documentación respectiva.
Observaciones		
El denunciante manifiesta que no es simpatizante del Partido Acción Nacional y por tanto, no quiere ser militante del mismo.		
Conclusiones		
<p>1.- El quejoso precisa que fue inscrito sin su consentimiento al padrón de afiliados del PAN</p> <p>2.- La DEPPP informó que el quejoso apareció en el padrón de militantes del PAN.</p> <p>3.- El PAN admitió que el quejoso se encuentra inscrito en su padrón de militantes, no obstante, no aportó elementos de prueba que comprobaran que el quejoso se afilió voluntariamente.</p>		

³¹ Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0291/2016 (Páginas 470 y 471)

³² Oficio REP-PT-INE-PVG-762/2016 (Páginas 472 y 473)

6. Cecilia Margarita Cabral Cruz

Cecilia Margarita Cabral Cruz		
Quejosa	Información proporcionada por la DEPPP³³	Manifestaciones del Partido Político³⁴
La denunciante manifiesta haber sido inscrito indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados del <i>PAN</i> .	Informó, que la denunciante está afiliada al Partido Acción Nacional desde el <u>treinta de mayo de dos mil cinco</u> .	Informó que la ciudadana se encuentra registrada como militante del Partido Acción Nacional desde el <u>treinta de mayo de dos mil cinco</u> y que su trámite de actualización de datos se realizó el treinta de junio de dos mil diecisiete, sin embargo, no aportó la documentación respectiva.
Observaciones		
El denunciante manifiesta que desconoce participar en el <i>PAN</i> y que quiere participar en el Proceso Electoral.		
Conclusiones		
1.- La quejosa precisa que fue inscrita sin su consentimiento al padrón de afiliados del <i>PAN</i> 2.- La <i>DEPPP</i> informó que la quejosa apareció en el padrón de militantes del <i>PAN</i> . 3.- El <i>PAN</i> admitió que la quejosa se encuentra inscrito en su padrón de militantes, no obstante, no aportó elementos de prueba que comprobaran que la quejosa se afilió voluntariamente.		

³³ Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0291/2016 (Páginas 470 y 471)

³⁴ Oficio REP-PT-INE-PVG-762/2016 (Páginas 472 y 473)

7. Erika Jazmín Aguirre Gutiérrez

Erika Jazmín Aguirre Gutiérrez		
Quejosa	Información proporcionada por la DEPPP ³⁵	Manifestaciones del Partido Político ³⁶
La denunciante manifiesta haber sido inscrito indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados del PAN.	Informó, que la denunciante está afiliada al Partido Acción Nacional desde el <u>ocho de enero de dos mil catorce</u> .	Informó que la ciudadana se encuentra registrada como militante del Partido Acción Nacional desde el <u>ocho de enero de dos mil catorce</u> y que su trámite de actualización de datos se realizó el siete de julio de dos mil diecisiete, sin embargo, no aportó la documentación respectiva.
Observaciones		
El denunciante manifiesta que desconoce participar en el PAN y que quiere participar en el Proceso Electoral.		
Conclusiones		
<p>1.- La quejosa precisa que fue inscrita sin su consentimiento al padrón de afiliados del PAN</p> <p>2.- La DEPPP informó que la quejosa apareció en el padrón de militantes del PAN.</p> <p>3.- El PAN admitió que la quejosa se encuentra inscrito en su padrón de militantes, no obstante, no aportó elementos de prueba que comprobaran que la quejosa se afilió voluntariamente.</p>		

³⁵ Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0291/2016 (Páginas 470 y 471)

³⁶ Oficio REP-PT-INE-PVG-762/2016 (Páginas 472 y 473)

II. Afiliación respecto de las que el partido político denunciado no acreditó haber dado de baja del padrón de militantes al ciudadano

1. Gerardo Silverio Enríquez Castellanos

Gerardo Silverio Enríquez Castellanos		
Quejoso	Información proporcionada por la DEPPP³⁷	Manifestaciones del Partido Político³⁸
El denunciante, en su escrito de queja manifiesta: <i>“...solicité mi desafiliación del partido con algunos meses anteriores a la fecha y no se ha dado mi baja de su padrón.”</i>	Informó, que el denunciante está afiliado al Partido Acción Nacional desde el <u>uno de agosto de dos mil once</u> .	Informó que el ciudadano se encuentra registrado como militante del Partido Acción Nacional desde el <u>uno de agosto de dos mil once</u> , sin embargo, afirmó que no cuenta con la constancia de afiliación respectiva, toda vez que por acuerdo de la Comisión de Vigilancia del Registro Nacional de Miembro autorizó al Director del citado Registro destruir el archivo muerto del área a su cargo.
Observaciones		
El denunciante en su escrito de desafiliación dirigido al partido político denunciado manifiesta que con varios meses de anterioridad solicitó dar por concluida su relación con el <i>PAN</i> por así convenir a sus intereses.		
Conclusiones		
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente en el apartado denominado CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE VIOLACIÓN AL DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO , no existe controversia en el sentido de que el afectado fue militante del <i>PAN</i> .		
No obstante, manifestó que el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, fecha en que presentó su escrito de queja, continuaba inscrito en el padrón de militantes del citado instituto político, pese a que, el quejoso manifiesta que en meses anteriores había solicitado su baja de dicho padrón. No obstante, al veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, ³⁹ de conformidad con la información proporcionada por la DEPPP y el partido denunciado, éste seguía apareciendo en el padrón de militantes del partido en cita. Por tanto, es de concluirse que se está en presencia de una violación al derecho de libre afiliación en perjuicio del denunciante, en su modalidad de no hacerle efectivo su derecho de desafiliación ; toda vez que contrario a la voluntad de la persona de no pertenecer como militante del ente político, el partido lo mantuvo dentro de sus registros de agremiados.		

³⁷ Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0291/2016 (Páginas 470 y 471)

³⁸ Oficio REP-PT-INE-PVG-762/2016 (Páginas 472 y 473)

³⁹ Visible a páginas 40-42 del expediente.

Ahora bien, debe precisarse que las constancias aportadas por la *DEPPP*, al ser documentos emitidos por autoridades dentro del ámbito de sus facultades, se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del *Reglamento de Quejas*, mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la *LGIPE* y 27, párrafo 2 del Reglamento citado; por tanto, tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

En el mismo tenor, las documentales allegadas al expediente por el partido político denunciado, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracción II del *Reglamento Quejas*; por lo que, por si mismas, carecen de valor probatorio pleno, y sólo alcanzarán ese grado cuando, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, generen convicción en este *Consejo General* sobre la veracidad de los hechos a que se refieren, ello al tenor de lo preceptuado en los artículos 462, párrafo 3 de la *LGIPE*, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención.

5. CASO CONCRETO

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por los quejosos, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5 del *COFIPE*, cuyo contenido se replica en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; esto es, **partido político**, candidato o inclusive cualquier

persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

En tal sentido, por cuanto hace a la existencia del supuesto normativo, debe reiterarse, como se estableció en apartados previos, que desde hace décadas está reconocido en la legislación de este país, la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, y de igual manera, que las personas en este país tienen el derecho de que se proteja su información privada y sus datos personales, todo lo cual está previsto desde el nivel constitucional.

En el caso, si bien en el marco normativo se hace referencia a los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, identificados con el número de resolución CG617/2012 y, de igual manera se transcribe la parte de disposiciones estatutarias del partido político denunciado, relacionada con el procedimiento de afiliación, lo cierto es que, por el carácter constitucional de tales derechos, la existencia de los mismos —y las obligaciones correlativas a éstos—, no está condicionada al reconocimiento por parte de los sujetos obligados, en este caso, de los partidos políticos.

En otras palabras, si la libre afiliación a los institutos políticos es un derecho de los ciudadanos de este país desde hace varios decenios, resulta por demás evidente que las obligaciones de los partidos políticos que deriven de esta garantía -respetar la libertad de afiliación y, de ser necesario, acreditar que la incorporación a cada

instituto político- no debe estar sujeta o condicionada a que éstos establezcan en sus normas internas disposiciones encaminadas a su protección, es decir, no depende, del momento en el que los partidos políticos hayan incluido en sus normas internas la obligación de que la afiliación sea voluntaria.

Ahora bien, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, la autoridad debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

En principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento que formula en contra de la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde al quejoso.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la *Ley de Medios*, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 de la *LGIPE*.

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, referido previamente, que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que contaba con el consentimiento de los quejosos para afiliarlos a su partido político, y no a los ciudadanos que negaron haber solicitado su inclusión en el padrón de militantes del PAN.

Así, como vimos en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, está demostrado a partir de la información proporcionada por la *DEPPP* que los ciudadanos denunciantes se encontraron, en ese momento, como afiliados del *PAN*.

Por otra parte, el *PAN* no demostró con medios de prueba, que la afiliación respectiva sea el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de los **siete quejosos** referidos, debiendo precisar que la carga de la prueba corresponde al citado instituto político, en tanto que la carga para los actores consiste en demostrar que no dieron su consentimiento para ser afiliados, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba.

Mientras que por cuanto hace al ciudadano que se afilió voluntariamente pero que solicitó su desafiliación al citado partido político a pesar de que el *PAN* al contestar el emplazamiento tuvo a la vista las constancias que integran el expediente al rubro citado no manifestó ni aportó documento alguno que desvirtuara la afirmación del quejoso.

Ahora bien, tal y como quedó de manifiesto en el apartado del *MARCO NORMATIVO* de la presente Resolución, así como en el correspondiente a *CARGA Y ESTANDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO*, la libertad de afiliación en materia político-electoral, es un derecho reconocido y así garantizado para todo ciudadano de nuestro país, al menos desde hace varias décadas, tanto a nivel constitucional como legal, el cual es concebido como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido político, permanecer afiliado a éste, desafiliarse e, incluso, no pertenecer a ninguno. Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección de datos personales e información relacionada con la vida privada de las personas, es igualmente un derecho con una trayectoria de protección por demás lejana.

En este sentido, es pertinente dejar en claro que la garantía y protección a los citados derechos, evidentemente no deriva de disposiciones reglamentarias al interior de los institutos políticos, que prevean como obligación del partido político, la conservación de los expedientes de afiliación de cada miembro, ni tampoco a partir de la emisión de los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados*

de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, emitidos por el propio INE en la Resolución CG617/2012, sino que, como se vio, el derecho tutelado deviene de disposiciones de rango supremo, el cual debe ser tutelado en todo momento, y no a partir de normas internas o reglamentarias que así lo establezcan.

En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos políticos es un derecho de los ciudadanos previsto como garantía constitucional en nuestro País desde hace décadas, también lo es la obligación de los partidos políticos de preservar, y en su caso, de demostrar, en todo momento, que cualquier acto que engendre la voluntad de un ciudadano para formar parte en las filas de un instituto político, esté amparado en el o los documentos que demuestren indefectiblemente el acto previo del consentimiento, siendo **ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no se tiene o tenía el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes.**

Al respecto, el estudio de fondo del presente asunto se realizará en dos apartados:

APARTADO A. Ciudadanos afiliados sin su consentimiento y cuyos datos personales fueron utilizados indebidamente por el PAN.

Respecto a los ciudadanos Leonardo Iván Galicia García, Juan Fernando Garza Vázquez, Mario Gómez López, Andrea Velázquez Jiménez, Artemio Rodríguez Bautista, Cecilia Margarita Cabral Cruz y Erika Jazmín Aguirre Gutiérrez, el presente procedimiento sancionador ordinario es **FUNDADO** en contra del PAN por las razones y consideraciones siguientes:

El instituto político denunciado precisa que se encuentra imposibilitado para aportar las constancias de afiliación de los denunciantes, en razón de que las Comisiones de Vigilancia del Registro Nacional de Miembros y de Afiliación del Consejo Nacional, en sesiones ordinarias del nueve de agosto de dos mil trece y dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, respectivamente, autorizaron al Director del Registro Nacional del Militantes para que realizara la destrucción del archivo muerto del área a su cargo hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis.

Para sustentar su dicho el partido político aporta copia simple del oficio CVRNM/2013/033,⁴⁰ suscrito por Emma Larios Gaxiola, coordinadora de la Comisión de Vigilancia del Registro Nacional de Miembros a través del cual autoriza al mencionado Director la destrucción del archivo muerto; asimismo, anexa imágenes que documentan la citada destrucción; no obstante, con esos documentos no se acredita que se hayan destruido constancias de afiliación de los quejosos, de ahí que, no sean suficientes para acreditar el dicho del partido político denunciado.

Por otra parte, del análisis del Reglamento de Militantes del *PAN* se advierte que el órgano partidista que reciba una solicitud de afiliación la debe registrar y digitalizar en la Plataforma PAN,⁴¹ de ahí que el partido político esté en aptitud de aportar elementos de convicción para hacer valer que las afiliaciones denunciadas se realizaron conforme a derecho.

No obstante, de las constancias que obran en autos, no se advierte que el *PAN* tenga las constancias de afiliación de los quejosos en la citada Plataforma y así cumplir con la normatividad general y la interna, para respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, toda vez que por regla general, como se ha establecido a lo largo de la presente determinación, los partidos políticos tienen la carga de conservar, resguardar y en su caso restituir las documentales que acrediten la afiliación libre y voluntaria a su partido.

Por otra parte, el partido político denunciado señaló que los ciudadanos Juan Fernando Garza Vázquez, Mario Gómez López y Andrea Velázquez Jiménez causaron baja del padrón de militantes del *PAN*, el quince de noviembre de dos mil diecisiete, en virtud de la aplicación de los Acuerdos por los que se Autoriza el Programa Específico de Revisión, Verificación, Actualización, Depuración y Registro de Datos y Huellas Digitales implementado por el Registro Nacional de Militantes, en diversas entidades federativas, entre ellas Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco, a las cuales corresponden, respectivamente, los citados ciudadanos, no obstante, el *PAN* se limitó a aportar copia simple de los citados acuerdos de los

⁴⁰ Visible en la hoja 176 del expediente.

⁴¹ Artículo 17, 30, fracción III y 80, fracción III

cuales se advierte el procedimiento para realizar la revisión, verificación, actualización, depuración y registro de datos y huellas digitales, sin embargo, de los mismos no se desprende ningún elemento que los vincule directamente con los quejosos a partir del cual se haga evidente que en acatamiento a esos acuerdos se dio de baja a los tres ciudadanos citados, de ahí que el partido político denunciado carece de elementos para acreditar su dicho en el presente procedimiento.

Por otro lado, cabe mencionar que las constancias aportadas por el partido político son documentales privadas las cuales únicamente constituyen un indicio y al no poderse concatenar con otro medio de convicción, no son prueba plena.

Se arriba a la anterior afirmación con base en lo previsto en el artículo 22, párrafo 1, del *Reglamento*, que establece con claridad las constancias que se consideran documentales públicas, a saber: *documentos originales y certificaciones expedidos por órganos electorales en ejercicio de sus funciones; documentos expedidos por las autoridades dentro del ámbito de sus facultades y documentos expedidos por fedatarios públicos.*

De ahí que los documentos aportados por el *PAN* no se encuentran en dicho supuesto, y por tanto, con fundamento en lo previsto por los artículos 462, párrafo 3, de la *LGIPE* y 27, numeral 3, del *Reglamento*, debe reiterarse que se trata de simples indicios y que, para poder acreditar que las cédulas de afiliación de los quejosos fueron destruidas en acatamiento de los acuerdos emitidos por los referidos órganos partidistas, así como que los ciudadanos fueron dados de baja en acatamiento de los acuerdos citados, el partido político denunciado debió ofrecer otros medios de convicción; al no hacerlo, debe establecerse que se trata de una simple manifestación del *PAN*, que no le exime de su obligación de contar con las constancias de afiliación de los *denunciantes*.

Lo anterior, porque, como se mencionó, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que, de manera insuperable, el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

En este sentido, toda vez que los **siete** denunciantes niegan haber otorgado su consentimiento, que su afiliación se comprobó por la autoridad electoral competente, y que el *PAN* no cumplió su carga para demostrar que la afiliación sí se solicitó voluntariamente; esta autoridad electoral considera que existe una vulneración al derecho de afiliación de los quejosos y que, intrínsecamente, para la configuración de esa falta utilizaron sin autorización sus datos personales, lo cual, debe ser considerado por esta autoridad para la imposición de la sanción que, en cada caso, amerite.

Es importante señalar que por lo que se refiere a los denunciantes Leonardo Iván Galicia García, Artemio Rodríguez Bautista, Cecilia Margarita Cabral Cruz y Erika Jazmín Aguirre Gutiérrez, esta autoridad reitera lo asentado en los recuadros

correspondientes, es decir, a pesar de que el partido político denunciado admitió que esos ciudadanos se encuentran registrados en su padrón de militantes, lo cual fue confirmado por la *DEPPP*, no obstante, no aportó, en original o copia certificada, las constancias de afiliación respectivas de las que se pueda desprender que las citadas afiliaciones fueron consentidas, en consecuencia, la conclusión a la que se arriba esta autoridad es que las afiliaciones de los citados ciudadanos se realizaron sin apego a la normatividad aplicable.

Ahora bien, por lo que respecta a Andrea Velázquez Jiménez, Mario Gómez López y Juan Fernando Garza Vázquez, cabe hacer mención que el *PAN* señaló que los citados ciudadanos causaron baja el quince de noviembre de dos mil diecisiete, pero al respecto debe decirse que tal mención no se vincula con la *Litis*, ni resulta idónea para desvirtuar la conducta imputada, puesto que los quejosos se duelen de que fueron afiliados al partido político denunciado sin su consentimiento, sin que el partido denunciado haya aportado las constancias de afiliación de las que se desprenda que los quejosos manifestaron su conformidad para pertenecer a esa fuerza política, de ahí que resulta incontrovertible que las afiliaciones denunciadas incumplen con los requisitos legales.

Por lo anterior, este órgano colegiado considera pertinente declarar **fundado** el presente procedimiento, pues se concluye que el señalado instituto político infringió las disposiciones electorales tendentes a demostrar la libre afiliación de los **siete ciudadanos** antes referidos, quienes aparecieron como afiliados a dicho instituto político, por no demostrar el acto volitivo de éstos para permanecer agremiados a ese partido.

En efecto, como se demostró anteriormente, los denunciantes que aparecieron afiliados al *PAN*, manifestaron que en momento alguno otorgaron su consentimiento para ello, siendo que dicho instituto político no demostró lo contrario, por lo que se actualiza la violación al derecho fundamental de libre afiliación garantizado desde la Constitución y la ley, según se expuso.

Así pues, el *PAN*, en los siete casos analizados, no demostró que las afiliaciones se realizaron a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que dichos ciudadanos

hayan dado su consentimiento para ser afiliados, ni mucho menos que hayan permitido o entregado datos personales para ese fin, los cuales se estiman necesarios para procesar las afiliaciones, dado que estos elementos se constituyen como insumos obligados para, en su momento, llevar a cabo una afiliación, de ahí que esto sea necesario e inescindible.

Con base en ello, ante la negativa de los denunciantes de haberse afiliado al *PAN*, correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de pruebas idóneas, que la afiliación se llevó a cabo a través de los mecanismos legales para ello, en donde constara fehacientemente la libre voluntad de los hoy promoventes, lo que no hizo, pues como en cada caso se detalló, las documentales aportadas resultan insuficientes para acreditar el ejercicio libre, personal y voluntario del derecho de afiliación a dicho instituto político.

Es decir, dicho instituto político debió demostrar, con documentación soporte o pruebas idóneas, que dichas afiliaciones se realizaron de forma libre o voluntaria, o bien, que la aparición del nombre y datos de los quejosos en su padrón de militantes, fue consecuencia de un error involuntario o de alguna circunstancia diversa, pero no lo hizo.

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación al *PAN* implica, además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que pudiera haber servido de base o justificación al partido político para afiliar a los ahora quejosos.

Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales, tiene íntima vinculación con la indebida afiliación de los siete quejosos sobre los que se declara fundado el presente procedimiento, lo cual ya quedó debidamente acreditado y, como consecuencia de ello, merece la imposición de las sanciones que se determinarán en el apartado correspondiente.

Cabe referir que a similar conclusión arribó este Consejo General en la resolución INE/CG787/2016, de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, al resolver el

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GSEC/JD04/CHS/35/2018

procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y su acumulado UT/SCG/Q/PRD/JL/SIN/6/2016, derivado de una falta de la misma naturaleza a la que aquí se estudia, en donde se determinó que el uso de datos personales poseía un carácter intrínseco o elemento esencial para la configuración de una afiliación indebida.

Ahora bien, más allá de la determinación de responsabilidad al partido político y la consecuente imposición de sanción, esta autoridad debe tutelar el derecho fundamental de afiliación de los quejosos, es decir, estamos frente a la defensa de un derecho humano de naturaleza político-electoral, que en términos del artículo 1° de la Constitución Federal debe ser respetado, protegido y garantizado por todas las autoridades del Estado Mexicano.

En tal sentido, se tiene que la voluntad de los denunciantes es no pertenecer a este partido político, por lo que se debe vincular al *PAN* para que, de ser el caso, en el supuesto que los quejosos continúen en su padrón de militantes, sean dados de baja inmediatamente e informe lo anterior mediante oficio a la *DEPPP*, para que a su vez, en el ámbito de sus atribuciones, proceda conforme a Derecho.

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017, de cinco de enero del año en curso, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el INE, que lo vincule con un instituto político en particular.

Lo anterior encuentra también sustento en lo establecido por la Sala Superior, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-141/2018, sentencia en la que estableció, en la parte que interesa, lo siguiente:

“...los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de un ciudadano pertenecer a un partido político, no puede alegar que existe uso indebido de sus datos personales porque se consideran públicos.”

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GSEC/JD04/CHS/35/2018

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban pertenecer...”

Por tanto, es de concluirse que, a partir de las constancias que obran en autos, se tiene acreditado que el PAN vulneró el derecho de libertad de afiliación —utilizando indebidamente datos personales—, respecto de los ciudadanos que se enlistan a continuación y a partir de las fechas que en cada caso se precisan.

No	Ciudadano	Fecha de afiliación
1	Leonardo Iván Galicia García	13/01/2014
2	Juan Fernando Garza Vázquez	07/06/2014
3	Mario Gómez López	01/08/2014
4	Andrea Velázquez Jiménez	30/01/2005
5	Artemio Rodríguez Bautista	14/06/2011
6	Cecilia Margarita Cabral Cruz	30/05/2014
7	Erika Jazmín Aguirre Gutiérrez	08/01/2014

En consecuencia, al determinarse que el PAN infringió la norma electoral ya señalada, lo conducente es establecer la sanción correspondiente.

Apartado B. Ciudadano sobre el que se violó su derecho a la libre afiliación en su vertiente de no permitirle su desafiliación

Respecto a **Gerardo Silverio Enríquez Castellanos**, el presente procedimiento sancionador ordinario es **FUNDADO** en contra del PAN, por las razones y consideraciones siguientes:

En principio debe señalarse que, tal y como se ha referido en el apartado de marco normativo de la presente Resolución, todo ciudadano mexicano tiene derecho a asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III y 41, párrafo segundo Bases I, párrafo segundo *in fine*, y IV, de la *Constitución*, así como 5°, párrafo 1, del *COFIPE*, este último replicado en el diverso 3, párrafo 2, de la *LGPP*.

Así, en ejercicio del derecho de asociación en materia político-electoral, los ciudadanos pueden formar partidos y agrupaciones políticas, cumpliendo para ello con los requisitos que establece la ley.

En este contexto, la libertad de asociación política constituye la base de la formación de los partidos, de manera que, en ejercicio de esa potestad, todo ciudadano, por igual, puede formar parte de ellos bajo la condición de cumplir con los requisitos que establece la norma, pudiendo también, en consonancia con esa libertad, tener la posibilidad de **desafiliarse** de éste en el momento que así lo desee.

Lo anterior fue reiterado por la Sala Superior, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-138/2018 y su acumulado SUP-RAP-144/2018, mediante la cual se confirmó la Resolución INE/CG444/2018, en dicha sentencia se estableció que los órganos partidistas que en su caso hubieran recibido escritos de renuncia a afiliación partidista, deberían remitirlos a la autoridad partidista correspondiente a fin de procediera como en derecho corresponda, para proteger el derecho político electoral de libre afiliación.

Con base en ello, se considera que existirá violación a la libertad de afiliación, por parte de un partido político, cuando sin mediar justificación alguna, mantiene en contra de su voluntad a un ciudadano dentro de su padrón de afiliados, toda vez que dichas personas morales, en su calidad de entidades de interés público, en términos del numeral 41, Base I, de la *Constitución* tienen el deber irrestricto de garantizar el libre ejercicio de derechos fundamentales de todos los ciudadanos, entre ellos, los relativos a la libertad de afiliación política y, al no actuar de esta forma, evidentemente afecta su esfera jurídica, al relacionarlos con una fuerza política a la que ya no quieren pertenecer, siendo que su derecho a terminar el vínculo que los unía con el partido se vio afectado.

En el caso, de conformidad con lo asentado en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, está demostrado, a partir de la información proporcionada por la *DEPPP* y el propio instituto político denunciado, que el hoy quejoso se encuentra afiliado al *PAN*.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GSEC/JD04/CHS/35/2018

No obstante, Gerardo Silverio Enríquez Castellanos, se inconformó por la negativa del partido de desincorporarlo de su padrón de militantes.

En efecto, del escrito de queja, así como del oficio de desconocimiento de desafiliación que el denunciante presentó ante el propio partido político denunciado, se advierte que Gerardo Silverio Enríquez Castellanos presentó escrito por el cual solicitó al PAN que lo desafiliara de su padrón de militantes, lo cual no ocurrió.

En efecto, de los documentos aportados por Gerardo Silverio Enríquez Castellanos se desprende que, el escrito de queja fue presentado ante el órgano desconcentrado competente el **diecinueve de enero de dos mil dieciocho**.

De igual modo, debe hacerse notar que, adjunto al escrito de denuncia, el denunciante presentó un escrito del tenor siguiente:

04

OFICIO DE DESCONOCIMIENTO DE AFILIACIÓN

Pichvante Chigpa a 18 de Enero de 2018.

Asunto: Oficio de desconocimiento de afiliación

PARTIDO POLÍTICO Partido Acción Nacional
P R E S E N T E

☒ Gerardo Silverio Enríquez Castellanos, con clave de elector()

(Nombre completo de la o el afiliado)

por mi propio derecho y señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en _____ del municipio _____ en el estado de CHIAS manifiesto que desconozco la afiliación al partido político PAN lo cual baso en los siguientes hechos:

con varios meses de anterioridad solicite dar por acabada mi relación con este partido político por así requerir a mis intereses y a la fecha segu apareciendo en dicho padrón

(Narración de los hechos)

COMITÉ DIRECTIVO
MUNICIPAL
EDUCALCO CHIAS
PAN

Gerardo Silverio Enríquez Castellanos
(Nombre completo y firma autografiada)

De lo inserto, debe precisarse que:

- ❖ Se trata de un documento titulado OFICIO DE DESCONOCIMIENTO DE AFILIACIÓN.
- ❖ El documento se dirige al PAN.

- ❖ En el documento aparecen el nombre y lo que parece ser la firma del denunciante.
- ❖ En tal constancia se asienta que “con varios meses de anterioridad solicité dar por concluida mi relación con ese partido político por así convenir a mis intereses”.
- ❖ En el documento aparece lo que parece ser la impresión de un sello en el que se lee: “COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL” PICHUCALCO, CHIAPAS” “PAN”, y abajo una firma, sin precisarse la fecha en que se recibió.

En relación con este último punto, debe señalarse que, si bien no existe anotación respecto de la fecha en que la manifestación del ciudadano fue recibida por el Comité Municipal del partido político denunciado en Pichucalco, Chiapas, lo cierto es que, al tratarse de un documento que se adjuntó al escrito de queja —del que sí se tiene evidencia que fue recibido el **diecinueve de enero de dos mil dieciocho**— debe arribarse a la conclusión de que, el señalado oficio de desconocimiento no pudo ser presentado ante el órgano partidista en fecha posterior a la ya señalada.

Ahora bien, al margen de que, la manifestación del quejoso en el sentido de que la petición de que se le diera de baja la realizó al partido político denunciado “varios meses antes” de que presentara su escrito de queja, no puede tenerse por válida, en razón de que Gerardo Silverio Enríquez Castellanos no presentó evidencia de ello, debe establecerse que esta autoridad considera que, en el expediente existen elementos para considerar que la vulneración efectivamente ocurrió.

Enseguida, debe precisarse que, tanto en su escrito de respuesta a requerimiento de información, de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, como en las documentales con las que desahogó el emplazamiento y la vista para alegatos —recibidas por esta autoridad electoral en fechas trece y veintiséis de abril de dos mil dieciocho—, el *PAN* manifestó que Gerardo Silverio Enríquez Castellanos es su militante y negó haber iniciado procedimiento para darle de baja.

Al respecto, se esquematiza el tiempo transcurrido entre la fecha en que el hoy denunciante presentó la queja que dio origen al presente asunto —pues, como ya

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GSEC/JD04/CHS/35/2018

se dijo, a partir de ese momento se tomará en cuenta para determinar el tiempo que permaneció afiliado sin su consentimiento—, y hasta la fecha en la que el partido político denunciado reconoció que seguía en sus filas.

Presentación del escrito de queja	Momentos en los que el PAN reconoció que el quejoso seguía en su padrón		
19/01/2018 ⁴²	28 de febrero de 2018	13 de abril de 2018	26 de abril de 2018

Como se evidencia, entre la presentación del escrito de queja (y su anexo, el escrito de desconocimiento) fueron presentados el 19 de enero y, hasta el 26 de abril, es decir, **más de tres meses después**, el partido político denunciado manifestó que aún no iniciaba procedimiento para dar de baja al ciudadano de su padrón de afiliados.

No pasa inadvertido que el partido político denunciado manifestó (en los escritos de respuesta al emplazamiento y de desahogo de la vista de alegatos), que el Registro Nacional de Militantes de ese instituto no había recibido solicitud de renuncia por parte del denunciante, lo cierto es que, como se evidencia de la notificación del acuerdo de emplazamiento,⁴³ el *PAN* recibió copia electrónica de las constancias de emplazamiento, entre las que se encuentra el ya señalado *oficio de desconocimiento*, sin que haya formulado objeción respecto de dicha constancia.

Así, el que dicho documento no haya sido controvertido por el partido político denunciado, le convierte, de una prueba documental privada, en términos de lo dispuesto en los artículos 461, párrafo 3, inciso b) de la *LGIPE* y 22, párrafo 1, fracción II, del *Reglamento de Quejas*, en una documental suficiente para tener por demostrada la solicitud de desafiliación aludida y, con base en ella, tener por acreditada la omisión del partido de atender esa petición, habida cuenta que, como ya se estableció, con el documento en cita, se corrió traslado al partido político denunciado a efecto de que se pronunciara al respecto en la etapa de emplazamiento de que fue objeto, sin que el *PAN* objetara la autenticidad del documento base del quejoso, así como tampoco su alcance y valor probatorio.

⁴² Visible en la hoja 5 del expediente.

⁴³ Folios 243 y 244

Con base en lo expuesto, se considera que debe concederse el valor y eficacia probatoria plena a la citada documental, ya que, con independencia de las razones expuestas en los párrafos que preceden, esta autoridad debe privilegiar y garantizar el derecho de libertad de afiliación en favor del denunciante que constituye este apartado, debiendo sancionar al partido por la conducta que se declaró fundada, a efecto de evitar en casos futuros la repetición de conductas con la que nos ocupa.

Sirven de apoyo a lo anterior, las razones que sustentan la tesis emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, **DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y PUEBLA, ESTA ÚLTIMA ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1998).**⁴⁴

En dicha ejecutoria el máximo Tribunal del País, determinó, en lo que interesa, **que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que es necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción.**

Además, resultan orientadores los criterios emitidos por los Tribunales Colegiados de Circuito, en los que se han pronunciado en tal sentido sobre el tema:

- **DOCUMENTOS PRIVADOS. OBJECCIÓN A LOS.**⁴⁵
- **DOCUMENTOS PRIVADOS. PARA NEGARLES VALOR PROBATORIO, NO BASTA LA SIMPLE OBJECCIÓN, SINO QUE DEBEN SEÑALARSE LAS CAUSAS EN QUE LA FUNDE Y DEMOSTRARLAS.**⁴⁶
- **DOCUMENTOS PRIVADOS, CARGA DE LA PRUEBA EN CASO DE OBJECCIÓN A LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).**⁴⁷

⁴⁴ Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005, página 266, Primera Sala, tesis 1a./J. 4/2005; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005, página 267.

⁴⁵ Jurisprudencia I.30c. J/8, Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, agosto de 1996, Página 423.

⁴⁶ Jurisprudencia III. 10c. J/17, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Número 63, marzo de 1993, Página 46.

⁴⁷ Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, agosto de 1993, Página 422.

Así, en términos de la información que obra en autos se advierte que:

1. No está a debate, que en algún momento **el ciudadano se afilió libre y voluntariamente al PAN**, con base en sus propias manifestaciones.
2. Conforme a la información proporcionada por la *DEPPP*, **se advirtió que el quejoso apareció en el padrón de militantes con afiliación válida**, de conformidad con la información extraída del *Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos*, capturados por el propio PAN, con corte al treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, con el propósito de acreditar el número mínimo de afiliados para la conservación de su registro.
3. Conforme con los elementos que obran en autos, esta autoridad tiene certeza de que, Gerardo Silverio Enríquez Castellanos, **solicitó su desafiliación al PAN**, y que, transcurrieron más de tres meses sin que se iniciara procedimiento para su baja del padrón.

Con base en las anteriores conclusiones, esta autoridad considera que el partido incurrió en una violación al derecho de libertad de afiliación política, en su modalidad de **no permitir la desincorporación de éste ciudadano como su militante**, en perjuicio del hoy quejoso, con motivo de la omisión o falta de cuidado en darla de baja de su padrón de afiliados, previa solicitud que por escrito se le formuló con ese propósito.

Por tanto, de conformidad con las constancias que fueron acompañadas por las partes en el procedimiento, se considera que el presente procedimiento debe declararse **FUNDADO**; lo anterior, porque el partido político denunciado no manifestó ni mucho menos acreditó la causa, motivo o razón por la cual mantuvo en contra de su voluntad a Gerardo Silverio Enríquez Castellanos dentro de un padrón de afiliados al cual no desea pertenecer, pese a que tuvo acceso completo a las constancias que integran el expediente al rubro citado.

Lo anterior es así, toda vez que, como ya se anunció, al tratarse de un ente de interés público, está obligado, entre otras cosas, a conducir sus actividades dentro

de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; al tenor de lo dispuesto en el inciso a) del párrafo 1, del artículo 25 de la *LGPP*.

La anterior conclusión tiene sustento en la Tesis de Jurisprudencia **29/2002**,⁴⁸ cuyo rubro y texto es al tenor literal siguiente:

“DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA.

Interpretar en forma restrictiva los derechos subjetivos públicos fundamentales de asociación en materia política y de afiliación política electoral consagrados constitucionalmente, implicaría desconocer los valores tutelados por las normas constitucionales que los consagran, así cabe hacer una interpretación con un criterio extensivo, toda vez que no se trata de una excepción o de un privilegio, sino de derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados, no restringidos ni mucho menos suprimidos. En efecto, los derechos fundamentales de carácter político-electoral consagrados constitucionalmente, como los derechos de votar, ser votado, de asociación y de afiliación, con todas las facultades inherentes a tales derechos, tienen como principal fundamento promover la democracia representativa, habida cuenta que, conforme con lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa y democrática. Lo anterior, en virtud de que las reglas interpretativas que rigen la determinación del sentido y alcances jurídicos de una norma no permiten que se restrinja o haga nugatorio el ejercicio de un derecho fundamental, como lo son los de asociación política y de afiliación político-electoral; por el contrario, toda interpretación y la correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus alcances jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que aquélla esté relacionada con un derecho fundamental. Lo anterior, desde luego, no significa en forma alguna sostener que los derechos fundamentales de carácter político sean derechos absolutos o ilimitados.”

Por tanto, se concluye que el derecho fundamental de desafiliación del denunciante debió ser garantizado por el *PAN*, habida cuenta que su goce y ejercicio no es una prerrogativa cuya disponibilidad quede a cargo del partido político denunciado, sino exclusivamente de los ciudadanos.

⁴⁸ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=29/2002&tpoBusqueda=S&sWord=29/2002>

Sirve de apoyo a los anteriores argumentos, lo establecido en la Tesis de Jurisprudencia **24/2002**,⁴⁹ del *Tribunal Electoral*, de rubro y texto siguientes:

“DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES.- El derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 5o., párrafos 1 y 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas, y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios y, por tanto, con mayor especificidad que el derecho de asociación y está garantizado jurisdiccionalmente mediante el sistema de medios de impugnación en materia electoral previsto en el artículo 41, fracción IV, primer párrafo, in fine, en relación con lo dispuesto en el artículo 99, fracción V, de la Constitución federal. Además, el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también la prerrogativa de pertenecer a éstos con todos los derechos inherentes a tal pertenencia; en particular, el derecho fundamental de afiliación político-electoral consagrado constitucionalmente faculta a su titular para afiliarse o no libremente a un determinado partido político, conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.”

En consecuencia, al determinarse que el *PAN* infringió la norma electoral ya señalada, se declara **fundado** el presente procedimiento, por cuanto hace a la omisión de desafiliar a Gerardo Silverio Enríquez Castellanos, así como por el uso indebido de sus datos personales.

⁴⁹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

Ahora bien, más allá de la determinación de responsabilidad al partido político y la consecuente imposición de sanción, esta autoridad debe tutelar el derecho fundamental de afiliación del quejoso, es decir, estamos frente a la defensa de un derecho humano de naturaleza político-electoral, que en términos del artículo 1° de la *Constitución* debe ser respetado, protegido y garantizado por todas las autoridades del Estado Mexicano.

Con base en ello, lo procedente es remitir copia certificada del escrito de queja con sus respectivos anexos al *PAN*, para que:

1. **Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución**, en el supuesto que el denunciante continúe en su padrón de afiliados, **sin mayor trámite**, se cancele su registro, con efectos a partir de que presentó su escrito de queja, y hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, las pruebas que amparen el cumplimiento.

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017, de cinco de enero del año en curso, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el *INE*, que lo vincule con un instituto político en particular.

2. En el ámbito de su competencia realice las investigaciones pertinentes e instaure los procedimientos que su normativa interna establezca y de ser el caso, finque las responsabilidades que correspondan, por la omisión de sus órganos internos, de desafiliar a Gerardo Silverio Enríquez Castellanos.

Finalmente, tomando en consideración que en el caso, se advierte una probable afectación al ejercicio de derechos ARCO, toda vez que Gerardo Silverio Enríquez

Castellanos se enteró que estaba en el padrón del *PAN* al haber expresado su intención para ser desafiliado del partido, lo que constituye una CANCELACIÓN de sus datos del padrón de miembros, en términos de los artículos 51, 52 y 54 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en consecuencia, se dejan a salvo los derechos del promovente, a fin de que, en caso de estimarlo pertinente, haga valer por la vía correspondiente y ante la autoridad competente la violación antes referida.

CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS SANCIONES. Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de las faltas denunciadas, así como la responsabilidad del *PAN*, en los casos detallados en el considerando que antecede, procede ahora determinar las sanciones correspondientes, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 355, párrafo 5 del *COFIPE*, cuyo contenido se reproduce en el diverso 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, relativo a la gravedad de la responsabilidad en que se incurra; el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; y, en su caso, la reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.

En relación con ello, la Sala Superior ha sostenido que para individualizar la sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción electoral.

1. Calificación de las faltas

A) Tipo de infracciones

Por lo que respecta a los siete ciudadanos, que fueron afiliados sin su consentimiento:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GSEC/JD04/CHS/35/2018

Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
La infracción se cometió por una acción del partido político denunciado, que transgredió disposiciones de la <i>Constitución</i> y del <i>COFIPE</i> , en el momento de su comisión.	La conducta fue la afiliación indebida y el uso no autorizado de los datos personales de ocho ciudadanos.	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la <i>Constitución</i> ; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del <i>COFIPE</i> ; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la <i>LGIPE</i> ; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la <i>Ley de Partidos</i> .

Por lo que respecta al ciudadano que no fue atendida su solicitud de desafiliación:

Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
La infracción se cometió por una omisión del partido político denunciado, que transgrede disposiciones de la <i>Constitución</i> y del <i>COFIPE</i> , en el momento de su comisión.	La conducta fue la violación a la libertad de afiliación y el uso indebido de los datos personales de Gerardo Silverio Enríquez Castellanos	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la <i>Constitución</i> ; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2; 341, párrafo 1, inciso a), 342, párrafo 1, incisos a) y n) y 354, párrafo 1, inciso a), del <i>COFIPE</i> ; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la <i>LGIPE</i> ; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), t) y u) de la <i>LGPP</i> .

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o prohibidas.

En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un

derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el caso concreto, se acreditó que el *PAN* incluyó indebidamente en su padrón de afiliados, a **siete** ciudadanos respecto de los que se determinó previamente la indebida afiliación y utilización de datos personales, en razón de que el citado instituto político no demostró que para incorporarlos medió la voluntad de éstos de inscribirse como sus militantes, violentando con ello lo previsto en los artículos 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*.

Asimismo también se acreditó que el *PAN* mantuvo indebidamente inscrito en su padrón de militantes a Gerardo Silverio Enríquez Castellanos, no obstante que tal ciudadano presentó escrito de desafiliación manifestando su voluntad de no permanecer como militante de dicho instituto político, violentando con ello lo establecido en los artículos 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; y 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e) del *COFIPE*; 443, párrafo 1, incisos a) y n); de la *LGIPE*, y 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *LGPP*.

A partir de estas premisas, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de los ciudadanos mexicanos, de optar libremente por ser o no militante de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, efectivamente consintieron libremente en ser sus agremiados.

Por otra parte, como se analizó, para la indebida afiliación acreditada en el expediente que se resuelve se usaron los datos personales de los promoventes sin que éstos hubiesen otorgado su consentimiento para ello, lo cual, constituye un

elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida.

Por otro lado, para el caso de Gerardo Silverio Enríquez Castellanos, quien presentó su renuncia al partido político, debe tenerse en cuenta que si bien, en un primer momento consintió el uso de sus datos personales para ser afiliado lo cierto es que al momento que éste le manifestó su intención de ser dado de baja del registro de afiliados del *PAN* lo cual no fue atendido, implicó que no se atendiera la oposición manifiesta de éste sobre el tratamiento que debía dársele a esos datos, es decir, para aparecer en un padrón al cual no deseaba pertenecer, lo que de suyo constituye también un uso indebido de datos personales, toda vez que éstos fueron utilizados por el partido para acreditar ante la autoridad electoral un número mínimo de militantes para la conservación de su registro.

En efecto, si bien es cierto, a partir de las constancias que obran en autos no está demostrado que los datos personales hubieran sido utilizados con un propósito diverso a la afiliación indebida en sí misma, o bien su difusión frente a terceros, lo es también que dicha información fue necesaria para materializar la incorporación de los datos de los actores al padrón de militantes del partido político denunciado.

Esto es, si bien es cierto, a partir de las constancias que obran en autos no está demostrado que los datos personales hubieran sido utilizados con un propósito diverso a las infracciones acreditadas, o bien su difusión frente a terceros, lo es también que dicha información fue necesaria para materializar la incorporación de los datos del quejoso al padrón de militantes del partido político denunciado.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo argumentado en la sentencia de siete de junio de dos mil dieciocho dictada por la Sala Superior al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-141/2018, en la que se estableció, en lo que interesa sobre el tema, lo siguiente:

...los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de un ciudadano pertenecer a un partido político, no puede alegar que existe uso indebido de sus datos personales porque se consideran públicos.

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban pertenecer.

De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar las sanciones correspondientes al partido político involucrado.

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que el *PAN* transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la normativa interna del propio instituto político, y que, tales infracciones se cometieron en detrimento de los derechos de más de un ciudadano, esta situación conlleva estar en presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, en el caso, se acreditaron las infracciones siguientes:

- Al derecho político electoral de libertad de afiliación al partido político denunciado, sin demostrar el consentimiento previo para ello, y
- Al derecho político electoral de libertad de desafiliación al *PAN*, el cual incluyó en su padrón de militantes al quejoso respecto del que se acreditó la conducta analizada y que mantuvo en ese padrón a Gerardo Silverio Enríquez Castellanos, quien previamente presentó su escrito de desafiliación.

D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, las conductas aquí analizadas deben valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

a) Modo.

Respecto a la inclusión de **siete** ciudadanos en el padrón de afiliados del *PAN*, sin tener la documentación soporte que acredite fehacientemente la voluntad de éstos

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GSEC/JD04/CHS/35/2018

de pertenecer a las filas de dicho instituto político, las irregularidades en que incurrió el partido denunciado consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*.

Asimismo, el citado partido político dejó de observar los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *LGPP*, al mantener contra su voluntad en su padrón de afiliados a Gerardo Silverio Enríquez Castellanos, tal y como se advirtió a lo largo de la presente Resolución de forma pormenorizada.

b) Tiempo.

En el caso concreto, las afiliaciones indebidas acontecieron en diversos momentos, como se detalla en la tabla siguiente:

No	Ciudadano	Fecha de afiliación
1	Leonardo Iván Galicia García	13/01/2014
2	Juan Fernando Garza Vázquez	07/06/2014
3	Mario Gómez López	01/08/2014
4	Andrea Velázquez Jiménez	30/01/2005
5	Artemio Rodríguez Bautista	14/06/2011
6	Cecilia Margarita Cabral Cruz	30/05/2014
7	Erika Jazmín Aguirre Gutiérrez	08/01/2014

Ahora bien, de los distintos escritos de denuncia, los quejosos advirtieron la existencia de anomalías, esencialmente, con motivo de la verificación de requisitos para ser contratados como aspirantes a Capacitadores Asistentes Electorales, en el Proceso Electoral 2017-2018.

Por lo que respecta a Gerardo Silverio Enríquez Castellanos, ciudadano que presentó su escrito de renuncia a la militancia del *PAN*, y de la cual dicho partido no procedió a darle de baja de su padrón de militantes, se tendrá como temporalidad de la realización de la conducta, conforme se argumentó previamente, la fecha en que presentó la queja, esto es, el diecinueve de enero del año en curso, sin que el denunciado realizara los trámites correspondientes a efecto de eliminarlo de su padrón de militantes, más aún señaló en su escrito de alegatos que desconocía haber recibido tal documento, no obstante, ese hecho resulta incontrovertible, por las razones ya expuestas.

Esta conclusión, encuentra sustento, *mutatis mutandis* en el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave **SUP-RAP-18/2018**,⁵⁰ en lo que en lo conducente, se señala lo siguiente:

“(...)

Ante esta situación, la autoridad electoral razonó que la única certeza que tenía respecto a esta cuestión es que en la fecha en que se presentó la denuncia los ciudadanos se encontraban afiliados a Movimiento Ciudadano. Por ese motivo, tomó en consideración esa fecha (veintitrés de enero de dos mil quince) para efectos de resolver el procedimiento sancionador. Esta decisión tuvo como fin último dotar de objetividad y certeza a la resolución adoptada.

...

En ese sentido, la autoridad electoral tomó en cuenta la falta de elementos que le permitieran tener certeza respecto a un dato de importancia y, a partir de ello, se basó en un parámetro objetivo para establecer una fecha hipotética respecto a la afiliación de los ciudadanos, con la finalidad de brindar una solución adecuada al procedimiento sancionador

(...)”

⁵⁰ http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-18-2018.pdf

- c) **Lugar.** Con base en las razones plasmadas en los escritos de denuncias, se deduce que las faltas atribuidas a los partidos políticos se cometieron de la siguiente manera:

No	Ciudadano	Entidad
1	Gerardo Silverio Enríquez Castellanos	Chiapas
2	Leonardo Iván Galicia García	Puebla
3	Juan Fernando Garza Vázquez	Nuevo León
4	Mario Gómez López	Quintana Roo
5	Andrea Velázquez Jiménez	Tabasco
6	Artemio Rodríguez Bautista	Zacatecas
7	Cecilia Margarita Cabral Cruz	Zacatecas
8	Erika Jazmín Aguirre Gutiérrez	Estado de México

E) Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Se considera que en el caso existe una conducta **dolosa** por parte del *PAN*, en violación a lo previsto en los artículos ya establecidos en los párrafos anteriores.

Las faltas se califican como **dolosas**, por lo siguiente:

- El *PAN* es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus de **entidad de interés público**, de conformidad con el artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Federal; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- El *PAN*, como cualquier otro partido está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 38, párrafo 1, inciso a), del *COFIPE*.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GSEC/JD04/CHS/35/2018

- El de libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
- La desafiliación a un partido político, es una modalidad del derecho fundamental de libre afiliación, por el cual un ciudadano elige libremente, en cualquier momento y sin restricción alguna de terceros, ya no pertenecer al mismo.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.
- Todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación o desafiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.
- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución Federal; 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e) del COFIPE.
- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de

ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria.**

- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La violación a la libertad de afiliación, es de orden constitucional y legal que **requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento o que aun cuando haya manifestado su voluntad de ser dado de baja de un padrón de afiliados, se conserve su registro injustificadamente**

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta relativa a la afiliación indebida se considera dolosa, porque:

- 1) Los quejosos aducen que no solicitaron en momento alguno su registro o incorporación como militantes al partido hoy denunciado.
- 2) Quedó acreditado que los quejosos aparecieron en el padrón de militantes del PAN.
- 3) El partido político denunciado no demostró que las afiliaciones de los quejosos se hubieran realizado a través de los mecanismos legales y partidarios conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y voluntaria de los denunciados.

- 4) El *PAN* no demostró ni probó que la afiliación de los **siete quejosos respecto de los que se determinó como fundada la infracción**, fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun indiciaria, para estimar que la afiliación de los quejosos fue debida y apegada a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.

Por lo que respecta a la omisión de desafiliar al ciudadano que realizó la solicitud respectiva, también se considera dolosa la conducta, porque:

- 1) Gerardo Silverio Enríquez Castellanos alude que, no obstante que presentó su renuncia a la militancia de ese partido político, lo cierto es que el *PAN* no lo desafilió.
- 2) Quedó acreditado que el quejoso apareció en el padrón de militantes de *PAN*.
- 3) El partido denunciado no demostró ni probó que la omisión en la desafiliación solicitada por el quejoso fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun indiciaria, para estimar que el hecho de mantener el registro de afiliación de Gerardo Silverio Enríquez Castellanos fue debido y apegado a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.

F) Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta atinente precisar que las conductas desplegadas por el *PAN*, se cometieron al afiliar indebidamente a **siete** ciudadanos, sin demostrar al acto volitivo de éstos tanto de inscribirse en su padrón de militantes como de haber proporcionado sus datos personales para ese fin; así como al mantener afiliado indebidamente a **Gerardo Silverio Enríquez Castellanos**, sin demostrar la voluntad de éste de permanecer inscrito en su padrón de militantes como de haber proporcionado sus datos personales para ese fin.

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en garantizar el derecho de libre afiliación y la protección de los datos personales de los ciudadanos mexicanos mediante la conservación de los documentos atinentes que permitan demostrar el acto de voluntad del ciudadano quejoso de militar en ese partido político, y de demostrar que sí realizó la baja de su padrón de la que, en el caso, presentó su respectiva renuncia, en el supuesto, de demostrar la voluntad de éste de querer seguir perteneciendo a dicho instituto político.

2. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A. Reincidencia

Por cuanto a la **reincidencia** en que pudo haber incurrido el partido materia de esta Resolución, este organismo electoral autónomo considera que **no se actualiza**.

De conformidad con el artículo 355 párrafo 6 del *COFIPE*, cuyo contenido reproduce el diverso 458, párrafo 6 de la *LGIPE*, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el mencionado *Código*, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, la *Sala Superior* ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);
2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,

3. Que en ejercicios anteriores el infractor **haya sido sancionado por esa infracción mediante Resolución o sentencia firme.**

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por la Sala Superior, a través de la Jurisprudencia 41/2010, cuyo rubro es: ***REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.***⁵¹

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con anterioridad.

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta.

En este sentido, debe precisarse que, en el presente asunto no puede considerarse actualizado dicho supuesto por cuanto hace al *PAN*, pues en los archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya sancionado a ese ente político por faltas como la que se sanciona por esta vía, que se hayan dictado con anterioridad a los hechos materia de las presentes denuncias.

B. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, las infracciones deben calificarse dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

Bajo este contexto, una vez acreditadas las infracciones, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si las faltas fueron levísimas, leves o graves, y en

⁵¹ De observancia obligatoria, en términos del artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de las infracciones, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo las infracciones electorales, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En este sentido, para la graduación de las faltas, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, pues se comprobó que el PAN afilió a siete quejosos, sin demostrar contar con la documentación que acredite que medió la voluntad de tales ciudadanos de pertenecer o estar inscritos a dicho instituto político.
- También se acreditó la infracción al derecho de libre afiliación y/o desafiliación de Gerardo Silverio Enríquez Castellanos al *PAN*, pues se comprobó que el denunciado no desafilió al ahora quejoso, sin demostrar contar con la documentación soporte correspondiente, que medió la voluntad de su agremiado de pertenecer nuevamente o estar inscrito a dicho instituto político.
- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, incluso en su modalidad de desafiliación, de optar por ser o no militante de algún partido político, y la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.

- Para materializar la violación a la libertad de afiliación de los denunciantes, se utilizaron indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para formar los padrones de afiliados del partido político denunciado.
- No existió un beneficio por parte del PAN, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral.
- Implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuraron dos conductas infractoras.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso Electoral.
- No existe reincidencia por parte del PAN.

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente **calificar las faltas** en que incurrió el partido político denunciado como de **gravedad ordinaria**, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el PAN, dolosamente, infringió el derecho de libre afiliación de los hoy quejosos, así como el derecho de desafiliación de un ciudadano lo que constituyen violaciones a un derecho fundamental de los ciudadanos, reconocido en la Constitución.

Al respecto, es importante precisar que para efectos de determinar el monto de las sanciones a imponer se debe diferenciar si se está ante una **indebida afiliación** o, ante una **violación al derecho de libre afiliación en su vertiente de no permitirle al quejoso ser desafiliado**.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo resuelto por la Sala Superior al dictar sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-141/2018, en la que determinó, esencialmente, lo siguiente:

Finalmente, para efectos de la sanción a imponer, consideró oportuno diferenciar entre aquellos ciudadanos de los que se utilizaron indebidamente sus datos personales para afiliarlos sin su consentimiento al partido denunciado (once ciudadanos) y aquélla que denunció la presunta indebida afiliación en su vertiente de falta de atención al derecho de desafiliación, puesto que, si bien en ambos casos estamos ante la presencia de una falta grave ordinaria, lo cierto es que en el primero de los supuestos hubieron hechos afirmativos tendentes a menoscabar el derecho de libre afiliación, utilizando datos personales de los afectados y en el segundo, se trata de una omisión, lo cual conlleva que la sanción imponer en cada supuesto sea diferenciada.

Por tal motivo, en el caso concreto, se estima que la motivación expuesta por el Instituto Nacional Electoral fue suficiente para justificar la individualización de la sanción.

C. Sanciones a imponer

Ahora bien, la mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tengan por acreditadas las faltas y la imputabilidad correspondiente, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción.

Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor cuantía⁵².

El artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIPE*, dispone el catálogo de sanciones a imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México; reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita; y en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la *Constitución* y de la *LGIPE*, con la cancelación de su registro como partido político.

⁵² Véase la tesis XXVIII/2003 de la Sala Superior, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GSEC/JD04/CHS/35/2018

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de las infracciones (especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de las infracciones acreditadas), así como las conductas realizadas por el *PAN en el caso concreto*, se determina que debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida.

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la *LGIPE*, confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor y que, a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realicen una falta similar.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que ni el *COFIPE* ni la *LGIPE* determinan pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo establece las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

Con base en lo anterior, este *Consejo General* estima que, derivado de las circunstancias que concurrieron las infracciones consistentes en la afiliación sin consentimiento de siete ciudadanos, así como la omisión de desafiliación de un

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GSEC/JD04/CHS/35/2018

ciudadano atribuidas al partido político denunciado, justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 354, párrafo 1, inciso a) del **COFIPE**, cuyo contenido se replica en el diverso 456, párrafo 1, inciso a, fracción II, de la **LGIPE**, consistente en una **MULTA, de manera individual, al partido político infractor y unitaria por cuanto hace a cada uno de los ciudadanos sobre quienes se cometieron las faltas acreditadas**, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto.

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la sanción a imponer.

En este orden de ideas, es pertinente hacer notar, que ha sido criterio de esta autoridad, al resolver los procedimientos UT/SCG/Q/EOA/CG/5/2016 y su acumulado, y UT/SCG/Q/MECG/JD06/CHIH/4/2016, el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis y siete de marzo de dos mil diecisiete, respectivamente —y que fue reiterado en el diverso SCG/Q/FSG/CG/33/INE/80/2014 Y SU ACUMULADO SCG/Q/JAEB/JL/CHIH/37/INE/84/2014, resuelto por este órgano máximo de dirección el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, bajo la clave INE/CG401/2017—, en los que se sancionó por una indebida afiliación de un ciudadano, en cada caso, con una multa equivalente a 642 (seiscientos cuarenta y dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento de

la comisión de la conducta, sanción que se estima debe tomarse como base para el presente asunto, si se considera que en dichos asuntos se demostró la comisión de una infracción similar a la que acontece en los casos que aquí se resuelven.

En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta causa, en específico **que no se refiere a la interposición de una sola queja** —a diferencia de lo que aconteció en los precedentes citados—, **sino de varias quejas y afiliaciones indebidas, las cuales han quedado acreditadas en autos, así como una queja por la omisión de desafiliación de un ciudadano**, es claro que la individualización de la sanción aplicada con motivo de la afiliación indebida de los ciudadanos al partido político denunciado, así como de desafiliación debe resultar proporcional al número de ciudadanos en cuyo perjuicio se cometieron dichas faltas, sin perder de vista las condiciones socioeconómicas del instituto político, y no simplemente, los hechos denunciados y acreditados en el presente procedimiento, a fin de que la sanción que se imponga resulte efectivamente proporcional sin ser excesiva.

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad debe determinar su monto o cuantía, **tomando en cuenta** las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean cada infracción, entre otras, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que corresponda.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión

que tiene sustento en la tesis relevante XXVIII/2003,⁵³ emitida por la Sala Superior, misma que a letra dice:

SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.- *En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.*

En ese sentido, como ha señalado con antelación, el partido denunciado incurrió en la afiliación sin el consentimiento de siete ciudadanos, así como en la omisión de dar de baja a Gerardo Silverio Enríquez Castellanos, no obstante que éste manifestó su voluntad de no querer permanecer en el padrón de afiliados del *PAN*, por lo que estamos ante faltas cometidas por omisión.

Con base en lo anterior, lo procedente es realizar un análisis por cada una de las conductas infractoras cometidas por el partido político denunciado, en dos apartados:

1. Apartado A. Conducta infractora consistente en la afiliación indebida de siete ciudadanos y la utilización de sus datos personales por parte del *PAN*.

A juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con base en lo dispuesto en la fracción II del numeral citado, lo procedente es imponer sendas **multas** equivalentes a **seiscientos cuarenta y dos** días de salario mínimo general

⁵³ Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 7, Año 2004, página 57

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GSEC/JD04/CHS/35/2018

para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) al *PAN*, **por cada uno de los siete ciudadanos que se acreditó fueron afiliados indebidamente.**

Al respecto, es un hecho notorio que se invoca en términos de lo establecido en el artículo 358 del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 461 de la *LGIPE*, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fija anualmente los montos respectivos, mismos que al ser relacionados con las fechas de afiliación, para obtener la sanción que corresponde por cuanto a cada uno de los ciudadanos indebidamente afiliados, arrojan lo siguiente:

PAN		
Total de quejosos	Salario mínimo	Monto en pesos
Afiliación en 2005		
2	\$46.8	\$60,091.20
Afiliación en 2011		
1	\$59.82	\$38,404.28
Afiliación en 2014		
4	\$67.29	\$172,800.72
TOTAL		\$271,296.20
[Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].		

Sanción por ciudadano:

No	Ciudadano	Año de afiliación	Salario Mínimo	Importe en pesos
1	Andrea Velázquez Jiménez	2005	\$46.8	\$30,045.60
2	Cecilia Margarita Cabral Cruz	2005	\$46.8	\$30,045.60
3	Artemio Rodríguez Bautista	2011	\$59.82	\$38,404.44
4	Leonardo Iván Galicia García	2014	\$67.29	\$43,200.18
5	Juan Fernando Garza Vázquez	2014	\$67.29	\$43,200.18
6	Mario Gómez López	2014	\$67.29	\$43,200.18
7	Erika Jazmín Aguirre Gutiérrez	2014	\$67.29	\$43,200.18

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, pues sin ser gravosa, sí puede inhibir al *PAN* para que en el futuro vigile el cumplimiento de las normas de la materia.

Ahora bien, es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la *Constitución* —efectuado por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones.

En esas condiciones, lo procedente es transformar la sanción que se considera idónea, construida a partir de la referencia legal de salarios mínimos, a Unidades de Medida y Actualización, para lo cual es necesario dividir el monto base establecido (la suma de multiplicar seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México por el salario mínimo vigente en cada año correspondiente a la afiliación), entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, misma que equivale, para el ejercicio fiscal en curso, a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M. N.).

De esta manera, al aplicar la fórmula mencionada, respecto de cada uno de los ciudadanos que fueron afiliados indebidamente por el *PAN*, se obtiene lo siguiente:

1. Ciudadanas Andrea Velázquez Jiménez y Ciudadana Cecilia Margarita Cabral Cruz, afiliadas en el año 2005.

El monto en pesos \$ 30,045.60 (que se obtiene de la referencia establecida en precedentes, de seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente, multiplicado por el salario mínimo del año en que se realizó la afiliación, esto es, \$46.80 —cuarenta y seis pesos 80/100 M. N.—) se divide entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, correspondiente a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.), y se obtiene que la sanción a imponer es una multa equivalente a 372.77 **(trescientos setenta y dos punto setenta y siete)** Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal; dicha cantidad resulta ser la sanción correspondiente respecto de las ciudadanas en cita, y su valor neto en pesos es de **\$30,045.26 (treinta mil cuarenta y cinco pesos 26/100 M.N., redondeado al segundo decimal), por cada una de las ciudadanas aquí citadas.**

2. Artemio Rodríguez Bautista, afiliado en el año 2011.

El monto en pesos \$ 38,404.28 (que se obtiene de la referencia establecida en precedentes, de seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente, multiplicado por el salario mínimo del año en que se realizó la afiliación, esto es,

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GSEC/JD04/CHS/35/2018

\$59.82 —cincuenta y nueve pesos 82/100 M. N.—) se divide entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, correspondiente a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.), y se obtiene que la sanción a imponer es una multa equivalente a 476.48 **(cuatrocientos setenta y seis punto cuarenta y ocho)** Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal; dicha cantidad resulta ser la sanción correspondiente respecto del ciudadano en cita, y su valor neto en pesos es de **\$38,404.29 (treinta y ocho mil cuatrocientos cuatro pesos 29/100 M.N., redondeado al segundo decimal).**

3. Ciudadanos Leonardo Iván Galicia García, Juan Fernando Garza Vázquez, Mario Gómez López y Erika Jazmín Aguirre Gutiérrez, afiliados en el año 2014.

El monto en pesos \$43,200.18 (que se obtiene de la referencia establecida en precedentes, de seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente, multiplicado por el salario mínimo del año en que se realizó la afiliación, esto es, \$67.29 —sesenta y siete pesos 29/100 M. N.—) se divide entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, correspondiente a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.), y se obtiene que la sanción a imponer es una multa equivalente a 535.98 **(quinientos treinta y cinco punto noventa y ocho)** Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal; dicha cantidad resulta ser la sanción correspondiente respecto del ciudadano en cita, y su valor neto en pesos es de **\$43,199.99 (cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M.N., redondeado al segundo decimal), por cada uno de los ciudadanos aquí citados.**

Entonces, al *PAN* se habrá de aplicar una sanción por cada uno de los ciudadanos, como se ha explicado y se resume enseguida:

No	Ciudadano	Año de afiliación	Salario Mínimo	Multa en UMAS	Multa en pesos
1	Andrea Velázquez Jiménez	2005	46.8	372.77	\$30,045.26
2	Cecilia Margarita Cabral Cruz	2005	46.8	372.77	\$30,045.26
3	Artemio Rodríguez Bautista	2011	59.82	476.48	\$38,404.29
4	Leonardo Iván Galicia García	2014	67.29	535.98	\$43,199.99
5	Juan Fernando Garza Vázquez	2014	67.29	535.98	\$43,199.99
6	Mario Gómez López	2014	67.29	535.98	\$43,199.99
7	Erika Jazmín Aguirre Gutiérrez	2014	67.29	535.98	\$43,199.99

Debe precisarse que se considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, ya que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, se concluye que las mismas resultan eficaces y proporcionales.

- **Apartado B. Conducta infractora consistente en omitir desafiliar a Gerardo Silverio Enríquez Castellanos, del PAN.**

Como ha señalado con antelación, el partido denunciado incurrió en la omisión de dar de baja a Gerardo Silverio Enríquez Castellanos, no obstante que éste manifestó no querer permanecer en el padrón de afiliados del *PAN*, por lo que estamos en una falta cometida por omisión.

Por lo tanto, a juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con base en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 354, párrafo 1, inciso a) del **COFIPE**, cuyo contenido se replica en el diverso 456, párrafo 1, inciso a, fracción II, de la **LGIPE**, lo procedente es imponer una **multa** equivalente a **trescientos veintiún días de Unidades de Medida y Actualización al PAN, por UN ciudadano que no fue desafiliado del instituto político de referencia.**

Lo anterior, pues conforme con lo previsto por el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la **LGIPE**, el parámetro de sanciones monetarias que se pueden imponer a los partidos políticos, será desde uno hasta diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México)

No obstante, en razón de que mediante la reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero de la *Constitución* –efectuado por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación–, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, por tal motivo no podrá emplearse como índice, medida, unidad, base o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones y que, conforme con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 10/2018, de rubro MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN, en el que la señalada autoridad jurisdiccional estableció que, *al imponer una multa, se debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GSEC/JD04/CHS/35/2018

respecto al monto de la sanción, esta autoridad considera necesario tasar la multa a partir de dicha unidad económica.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, conforme las constancias del expediente, la fecha que se tiene como referencia para la conducta en análisis, corresponde al año dos mil dieciocho y, que el valor de valor de la Unidad de Medida y Actualización en esa anualidad fue de \$75.49 (setenta y cinco pesos con cuarenta y nueve centavos 00/100 M.N.).⁵⁴

Sentando lo anterior, se procede a realizar el cálculo de la sanción que corresponde al *PAN*, con base en lo expuesto a continuación:

No	Ciudadano	Año en que se realizó la conducta acreditada	Multa en UMAS	Valor de la UMA	Multa en pesos
1	Gerardo Silverio Enríquez Castellanos	2018	321	80.60	\$25,872.6

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, pues sin ser gravosa, sí puede inhibir al *PAN*, para que en el futuro vigile el cumplimiento de las normas de la materia.

Sirve de apoyo a los anteriores razonamientos, la tesis de jurisprudencia 10/2018, emitida por la Sala Superior, de rubro y texto:

MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.- De la interpretación sistemática de los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transitorios segundo y tercero del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como 44, párrafo primero, inciso aa), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando en consideración el principio de legalidad que rige en los procedimientos sancionadores, se advierte que el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de

⁵⁴ <http://www.beta.inegi.org.mx/temas/uma/>

esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del ilícito.

D. EL MONTO DEL BENEFICIO, LUCRO, DAÑO O PERJUICIO ECONÓMICO DERIVADO DE LA INFRACCIÓN

Se estima que las infracciones cometidas por parte del *PAN*, aun cuando causaron un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de las infracciones.

E. Las condiciones socioeconómicas del infractor

Al respecto, resulta necesario precisar que, conforme con la información proporcionada por la DEPPP, a través del oficio **INE/DEPPP/DE/DPPF/5693/2018**, el monto de la ministración mensual para el sostenimiento de actividades ordinarias correspondientes al mes de septiembre de dos mil dieciocho para el *PAN*—una vez deducidos los conceptos correspondientes a multas y sanciones— es de \$68,812,589 (sesenta y ocho millones ochocientos doce mil quinientos ochenta y nueve pesos 00/100 m.n.).

F. Impacto en las actividades del sujeto infractor

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta al *PAN*, no es de carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida, respecto al monto del financiamiento que recibirá por concepto de actividades ordinarias permanentes en el mes de septiembre del año en curso, los siguientes porcentajes:

Partido político	Año	Monto de la sanción por ciudadano.⁵⁵	Ciudadanos indebidamente afiliados	% de la ministración mensual por ciudadano
<i>PAN</i>	2005	\$30,045.26	2	0.04%
	2011	\$38,404.29	1	0.05%
	2014	\$43,199.99	4	0.06%
	2018	\$25,872.6	1	0.03%

Por consiguiente, la sanción impuesta al *PAN* no es de carácter gravoso, si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual correspondiente al mes de septiembre de este año.

⁵⁵ Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción cometida por el *PAN* (especialmente los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con el financiamiento que recibe del *INE* para el mes de septiembre de dos mil dieciocho, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político sancionado.

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el partido político de mérito —tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagar sin que ello afecte sus operaciones ordinarias, además de que las sanciones son proporcionales a las faltas cometidas y se estima que, sin resultar excesivas ni ruinosas, pueden generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la *Sala Superior* en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-250/2009⁵⁶, es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

QUINTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE LOS QUEJOSOS COMO MILITANTES. En tal sentido, se tiene que la voluntad de los denunciantes es no pertenecer al *PAN*, por lo que se debe vincular al partido político, para que, en el supuesto que los quejosos continúen en su padrón de militantes, **sin mayor trámite, cancele su registro, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución**, con efectos a partir de la fecha en que cada uno presentó su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la *UTCE*, los medios de prueba que amparen el cumplimiento.

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017,⁵⁷ de cinco de enero del año en curso, sentencia en la que se concluyó la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la

⁵⁶ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm>

⁵⁷ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/JDC/2/SUP_2017_JDC_2-626321.pdf

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GSEC/JD04/CHS/35/2018

DEPPP, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el *INE*, que lo vincule con un instituto político en particular.

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la Constitución Federal,⁵⁸ se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el numeral 42 de la Ley de Medios.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara **fundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra del *PAN*, por lo que respecta a **Leonardo Iván Galicia García, Juan Fernando Garza Vázquez, Mario Gómez López, Andrea Velázquez Jiménez, Artemio Rodríguez Bautista, Cecilia Margarita Cabral Cruz y Erika Jazmín Aguirre Gutiérrez**, en términos del Considerando **TERCERO** de esta Resolución.

SEGUNDO. En términos del Considerando **CUARTO** de la presente Resolución, se impone al *PAN*, **una multa en los términos que enseguida se precisan, respecto de cada uno de los ciudadanos de los que se acreditó la falta ya señalada:**

No	Ciudadano	Importe de la Multa
1	Andrea Velázquez Jiménez	372.77 (Trescientos setenta y dos punto setenta y siete) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$30,045.26 (Treinta mil cuarenta y cinco pesos 26/100 M.N.) [ciudadana afiliada en 2005]
2	Cecilia Margarita Cabral Cruz	372.77 (Trescientos setenta y dos punto setenta y siete) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$30,045.26 (Treinta mil cuarenta y cinco pesos 26/100 M.N.) [ciudadana afiliada en 2005]

⁵⁸ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: II51. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª), Página: 2864, Rubro: “**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.**”

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GSEC/JD04/CHS/35/2018

No	Ciudadano	Importe de la Multa
3	Artemio Rodríguez Bautista	476.48 (Cuatrocientos setenta y seis punto cuarenta y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$38,404.29 (Treinta y ocho mil cuatrocientos cuatro pesos 29/100 M.N.) [ciudadano afiliado en 2011]
4	Leonardo Iván Galicia García	535.98 (Quinientos treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M.N.) [ciudadano afiliado en 2014]
5	Juan Fernando Garza Vázquez	535.98 (Quinientos treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M.N.) [ciudadano afiliado en 2014]
6	Mario Gómez López	535.98 (Quinientos treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M.N.) [ciudadano afiliado en 2014]
7	Erika Jazmín Aguirre Gutiérrez	535.98 (Quinientos treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M.N.) [ciudadana afiliada en 2014]

TERCERO. Se declara **fundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra del *PAN*, por lo que respecta a **Gerardo Silverio Enríquez Castellanos**, en términos del Considerando **TERCERO** de esta Resolución.

CUARTO. En términos del Considerando **CUARTO** de la presente Resolución, se impone al *PAN*, **una multa en los términos que enseguida se precisan, respecto de Gerardo Silverio Enríquez Castellanos por haberse acreditado la falta ya señalada:**

No	Ciudadano	Importe de la Multa
1	Gerardo Silverio Enríquez Castellanos	321 (Trescientos veintiún) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$25,872.60 (Veinticinco mil ocho cientos setenta y dos pesos 60/100 M.N.) [ciudadano que presentó su renuncia en 2018]

QUINTO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7 de la LGIPE, el monto de las multas impuestas al *PAN*, será deducido, según corresponda, de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciban dichos institutos políticos, una vez

que esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su considerando

SEXTO. Se vincula al *PAN* para que, en el supuesto que los quejosos continúen en su padrón de militantes, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución**, con efectos a partir de la fecha en que cada uno presentó su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la *UTCE*, los medios de prueba que amparen el cumplimiento, conforme lo dispuesto en el Considerando QUINTO.

SÉPTIMO. Se da vista al *PAN* a efecto de que en el ámbito de su competencia realice las investigaciones pertinentes e instaure los procedimientos que su normativa interna establezca y de ser el caso, finque las responsabilidades que correspondan, por la omisión de sus órganos internos, de desafiliar a un ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en el Considerando TERCERO.

OCTAVO. Tomando en consideración que en el caso, se advierte una probable afectación al ejercicio de derechos ARCO, toda vez que Gerardo Silverio Enríquez Castellanos se enteró que estaba en el padrón del *PAN*, al haber expresado su intención para ser desafiliado del partido, lo que constituye una CANCELACIÓN de sus datos del padrón de miembros, en términos de los artículos 51, 52 y 54 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en consecuencia, se dejan a salvo los derechos del promovente, a fin de que, en caso de estimarlo pertinente, haga valer por la vía correspondiente y ante la autoridad competente la violación antes referida, de conformidad con lo dispuesto en el Considerando TERCERO.

NOVENO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42 de la Ley de Medios.

Notifíquese personalmente a Gerardo Silverio Enríquez Castellanos, Leonardo Iván Galicia García, Juan Fernando Garza Vázquez, Mario Gómez López, Andrea Velázquez Jiménez, Artemio Rodríguez Bautista, Cecilia Margarita Cabral Cruz y Erika Jazmín Aguirre Gutiérrez; así como al *PAN*, por conducto de su representante ante este Consejo General; y por **estrados** a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GOP/JD03/BC/37/2018

INE/CG1246/2018

PROCEDIMIENTO **SANCIONADOR**
ORDINARIO
EXPEDIENTE:
UT/SCG/Q/GOP/JD03/BC/37/2018
DENUNCIANTES: GRACIELA ORTIZ PABLO Y
OTROS
DENUNCIADO: PARTIDO DEL TRABAJO

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/GOP/JD03/BC/37/2018 QUE SE DERIVA DE DIVERSAS QUEJAS PRESENTADAS POR DIECISIETE CIUDADANOS (17), EN CONTRA DEL PARTIDO DEL TRABAJO, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN SU AFILIACIÓN INDEBIDA AL CITADO INSTITUTO POLÍTICO Y, EN SU CASO, EL USO NO AUTORIZADO DE SUS DATOS Y DOCUMENTOS PERSONALES

Ciudad de México, 12 de septiembre de dos mil dieciocho.

GLOSARIO	
COFIPE	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Comisión	Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
DEPPP	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
DERFE	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral
INE	Instituto Nacional Electoral
LGIPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

GLOSARIO	
<i>LGPP</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>PT</i>	Partido del Trabajo
<i>Reglamento de Quejas</i>	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>Sala Superior</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>Tribunal Electoral</i>	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

A N T E C E D E N T E

Como se refirió anteriormente, el presente procedimiento deriva de diversas quejas presentadas por diecisiete ciudadanos (17),¹ quienes hicieron del conocimiento de esta autoridad hechos presuntamente contraventores de la normatividad electoral, consistente en la presunta afiliación indebida de los ciudadanos que enseguida se enlistan, porque no medió consentimiento para ello ni para el uso de sus datos personales, conducta que se atribuye al *PT*.

No.	Denunciantes	Fecha de presentación de la queja
1	Graciela Ortiz Pablo	23 de enero de 2018
2	Asthur Azael Vela Sulu	17 de enero de 2018
3	Gregoria Anguamea Arenas	10 de enero de 2018
4	Hugo Fernando Mafun Gómez	01 de diciembre de 2017
5	Elia Molina Vargas	24 de enero de 2018
6	Ma. de Lourdes De La Cruz Sánchez	09 de enero de 2018
7	Martha Araceli Coronado Coronado	09 de enero de 2018
8	Juan Arias Presenda	17 de enero de 2018
9	Domitilo López de la Cruz	11 de enero de 2018
10	Mario Alberto Carrillo López	26 de enero de 2018
11	Huitzilihuitl Acosta Ortega	26 Enero de 2018
12	Judith Soto Villarreal	08 de enero de 2018
13	Agapita Borges Cruz	06 de febrero de 2018

¹ En principio se recibieron diecisiete quejas, sin embargo, el veintiocho de febrero de este año, se emitió acuerdo de escisión respecto de las quejas presentadas por **Viridiana Lizeth Aguirre Curiel, Laura Xóchitl Michael Montaña, Eliezer Abidan Acevedo Barrera y Karen Lizbeth Mora Bejarano**, al advertirse que por la misma causa está en instrucción el procedimiento con clave UT/SCG/Q/GFA/JD09/OAX/9/2018. Lo anterior, a efecto de evitar el dictado de resoluciones contradictorias y resolver en forma conjunta, congruente, expedita y completa. Acuerdo visible a páginas 207 a 210 del expediente.

R E S U L T A N D O

I. Registro, admisión y reserva de emplazamiento.² El dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral instruyó el registro del procedimiento sancionador ordinario, al cual se le asignó la clave **UT/SCG/Q/GOP/JD03/BC/37/2018**, por la presunta afiliación indebida y el uso indebido de datos personales por parte del *PT*.

En el acuerdo en cita, se admitió a trámite el procedimiento de sanción señalado con anterioridad y se reservó lo relativo al emplazamiento de las partes; asimismo, se ordenó la realización de diversas diligencias de investigación.

Finalmente, se ordenó la notificación de dicho acuerdo de admisión al *PT*, así como a los ciudadanos denunciantes.

II. Diligencias de investigación. Con el objeto de proveer lo conducente y para la debida integración del presente asunto, la autoridad instructora determinó requerir, en distintos momentos, a los sujetos que se indican a continuación:

Acuerdo de 16 de febrero de 2018 ³		
Sujeto	Oficio-Fecha de notificación	Oficio-Fecha de respuesta
<i>PT</i>	INE-UT/1694/2018 20 de febrero de 2018. ⁴	REP-PT-INE-PVG-033/2018 ⁵ 23 de febrero de 2018
<i>DEPPP</i>	INE-UT/1695/2018 20 de febrero de 2018. ⁶	Correo electrónico ⁷ 21 de febrero de 2018

Acuerdo de 07 de marzo de 2018 ⁸		
Sujeto	Oficio-Fecha de notificación	Oficio-Fecha de respuesta
<i>PT</i>	INE-UT/2258/2018 08 de marzo de 2018. ⁹	Sin respuesta

² Visible a páginas 100 a 109 del expediente.

³ Visible a páginas 100 a 109 del expediente.

⁴ Visible a página 111 del expediente.

⁵ Visible a páginas 152-153 y anexo de 154-156 del expediente.

⁶ Visible a página 114 del expediente.

⁷ Visible a páginas 115-116 del expediente.

⁸ Visible a páginas 294-297 del expediente.

⁹ Visible a página 299 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GOP/JD03/BC/37/2018

Acuerdo de 16 de marzo de 2018 ¹⁰		
Sujeto	Oficio-Fecha de notificación	Oficio-Fecha de respuesta
PT	INE-UT/3505/2018 20 de marzo de 2018. ¹¹	REP-PT-INE-PVG-049/2018 ¹² 22 de marzo de 2018

III. Emplazamiento.¹³ El dos de abril de dos mil dieciocho, se ordenó el emplazamiento al *PT*, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la conducta que se le imputó y aportara los medios de prueba que considerara pertinentes.

Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito. El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Oficio- Fecha de respuesta
PT INE-UT/3982/2018 ¹⁴	Citatorio: ¹⁵ 03 de abril de 2018 Cédula: ¹⁶ 04 de abril de 2018 Plazo: 05 al 11 de abril de 2018	REP-PT-INE-PVG-070/2018 ¹⁷ 11 de abril de 2018.

IV. Alegatos.¹⁸ El trece de abril de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a las partes a efecto de que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera. El acuerdo de mérito, se diligenció en los siguientes términos:

Denunciado

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Oficio- Fecha de respuesta
PT INE-UT/4598/2018 ¹⁹	Citatorio: ²⁰ 17 de abril de 2018. Cédula: ²¹ 18 de abril de 2018. Plazo: 19 al 25 de abril de 2018.	REP-PT-INE-PVG-095/2018 ²² 24 de abril de 2018.

¹⁰ Visible a páginas 334-337 del expediente.

¹¹ Visible a página 339 del expediente.

¹² Visible a páginas 342-343 y anexo de 344-356 del expediente.

¹³ Visible a páginas 359-367 del expediente.

¹⁴ Visible a página 369 del expediente.

¹⁵ Visible a páginas 370-377 del expediente.

¹⁶ Visible a páginas 378-379 del expediente.

¹⁷ Visible a páginas 384-388 del expediente.

¹⁸ Visible a páginas 389-393 del expediente.

¹⁹ Visible a página 409 del expediente.

²⁰ Visible a páginas 410-415 del expediente.

²¹ Visible a páginas 416 a 417 del expediente.

²² Visible a páginas 503-505 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GOP/JD03/BC/37/2018

Denunciantes

No	Quejosos – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
1	Graciela Ortiz Pablo INE/BC/JD03/901/2018 ²³	Cédula: 20 de abril de 2018 Plazo: 23 al 27 de abril de 2018	Sin respuesta
2	Asthur Azael Vela Sulu INE/JDE-05/VS/230/2018 ²⁴	Citatorio: 18 de abril de 2018 Cédula: 19 de abril de 2018 Plazo: 20 al 26 de abril de 2018	Escrito en una foja ²⁵ , útil por el anverso, presentado el 25 de abril de 2018.
3	Gregoria Anguamea Arenas INE/BC/JD04/VE/0688/2018 ²⁶	Cédula: 18 de abril de 2018 Plazo: 19 al 25 de abril de 2018	Sin respuesta
4	Hugo Fernando Mafun Gómez ²⁷ INE-JDE11-MEX/VS/224/2018	Citatorio: 19 de abril de 2018 Notificación por estrados: 19 de abril de 2018 Plazo: 20 al 26 de abril de 2018	Sin respuesta
5	Elia Molina Vargas INE/JLE/MOR/VS/759/2018 ²⁸	Cédula: 18 de abril de 2018 Plazo: 19 al 25 de abril de 2018	Sin respuesta
6	Ma. de Lourdes De La Cruz Sánchez INE/SLP/JD01/VS/307/2018 ²⁹	Cédula: 19 de abril de 2018 Plazo: 20 al 26 de abril de 2018	Escrito en una foja ³⁰ , útil por el anverso, presentado el 24 de abril de 2018.
7	Martha Araceli Coronado Coronado INE/SLP/JD01/VS/314/2018 ³¹	Cédula: 19 de abril de 2018 Plazo: 20 al 26 de abril de 2018	Escrito en una foja ³² , útil por el anverso, presentado el 24 de abril de 2018.
8	Juan Arias Presenda INE/JDE/05TAB/1402/2018 ³³	Citatorio: 18 de abril de 2018 Cédula: 19 de abril de 2018 Plazo: 20 al 26 de abril de 2018	Sin respuesta
9	Domitilo López de la Cruz INE/JDE/05TAB/1401/2018 ³⁴	Cédula: 25 de abril de 2018 Plazo: 26 de abril al 3 de mayo de 2018	Sin respuesta
10	Mario Alberto Carrillo López INE/DGO/JD04/VS/0296/2018 ³⁵	Cédula: 20 de abril de 2018 Plazo: 23 al 27 de abril de 2018	Sin respuesta
11	Huitzilihuilit Acosta Ortega INE/DGO/JD04/VS/0297/2018 ³⁶	Cédula: 20 de abril de 2018 Plazo: 23 al 27 de abril de 2018	Sin respuesta
12	Judith Soto Villarreal INE/DGO/JD04/VS/0298/2018 ³⁷	Cédula: 19 de abril de 2018 Plazo: 20 al 26 de abril de 2018	Sin respuesta

²³ Visible a páginas 448 a 451 y 506 a 511 del expediente.

²⁴ Visible a página 554 del expediente.

²⁵ Visible a página 555 del expediente.

²⁶ Visible a páginas 438 a 444 del expediente.

²⁷ Visible a páginas 512 a 518 y de 531 a 535 del expediente.

²⁸ Visible a páginas 475 a 481 del expediente.

²⁹ Visible a página 433 a 437 y 458 a 462 del expediente.

³⁰ Visible a página 501 del expediente.

³¹ Visible a páginas 428 a 432 y 453 a 457 del expediente.

³² Visible a página 502 del expediente.

³³ Visible a páginas 524 a 530 y de 564 a 570 del expediente.

³⁴ Visible a páginas 520 a 523 y de 560 a 563 del expediente.

³⁵ Visible a páginas 465 a 467 del expediente.

³⁶ Visible a página 468 a 470 del expediente.

³⁷ Visible a páginas 471 a 473 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GOP/JD03/BC/37/2018

No	Quejosos – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
13	Agapita Borges Cruz INE/HGO/JDE03/VE/195/2018 ³⁸	Cédula: 18 de abril de 2018 Plazo: 19 al 25 de abril de 2018	Sin respuesta

Es importante precisar que el *PT* proporcionó diversa documentación respecto de los ciudadanos Ma. de Lourdes De La Cruz Sánchez, Martha Araceli Coronado Coronado, Juan Arias Presenda y Domitilo López de la Cruz, con el objeto de acreditar la debida afiliación de los denunciantes, razón por la cual la autoridad instructora determinó en el acuerdo de alegatos correr traslado con dichas constancias a cada uno de ellos.

V. Corrección a la admisión e investigación. El dieciséis de mayo del año en curso,³⁹ se acordó corregir la admisión respecto a **Asthur Azael Vela Sulu**, toda vez que, en diversos acuerdos dictados en el presente asunto se refirió de forma incorrecta su nombre.

Asimismo, se requirió información al *PT*, en los siguientes términos:

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Oficio- Fecha de respuesta
<i>PT</i> INE-UT/7185/2018 ⁴⁰	Citatorio: ⁴¹ 21 de mayo de 2018 Cédula: ⁴² 22 de mayo de 2018 Plazo: 23 al 29 de mayo de 2018	REP-PT-INE-PVG-146/2018 ⁴³ 25 de mayo de 2018.

VI. Emplazamiento.⁴⁴ El once de junio de dos mil dieciocho, se ordenó el emplazamiento al *PT*, respecto a Asthur Azael Vela Sulu, para efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la conducta que se le imputó y aportara los medios de prueba que considerara pertinentes.

Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito.

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

³⁸ Visible a páginas 421 a 425 del expediente.

³⁹ Visible a páginas 576-585 del expediente.

⁴⁰ Visible a página 587 del expediente.

⁴¹ Visible a páginas 588-594 del expediente.

⁴² Visible a páginas 595-596 del expediente.

⁴³ Visible a páginas 601-602 del expediente.

⁴⁴ Visible a páginas 636-640 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GOP/JD03/BC/37/2018

Denunciado

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Oficio- Fecha de respuesta
<i>PT</i> INE-UT/9043/2018 ⁴⁵	Citatorio: ⁴⁶ 12 de junio de 2018. Cédula: ⁴⁷ 13 de junio de 2018. Plazo: 14 al 20 de junio de 2018.	REP-PT-INE-PVG-204/2018 ⁴⁸ 18 de junio de 2018.

VII. Alegatos.⁴⁹ El tres de julio de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista al *PT*, así como a Asthur Azael Vela Sulu, a efecto de que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera. El acuerdo de mérito, se diligenció en los siguientes términos:

Denunciado

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Oficio- Fecha de respuesta
<i>PT</i> INE-UT/11189/2018 ⁵⁰	Citatorio: ⁵¹ 05 de julio de 2018. Cédula: ⁵² 06 de julio de 2018. Plazo: 09 al 13 de julio de 2018.	REP-PT-INE-PVG-290/2018 ⁵³ 13 de julio de 2018.

Denunciante

No	Quejoso – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
2	Asthur Azael Vela Sulu INE/JDE-05/VS/364/2018 ⁵⁴	Citatorio: ⁵⁵ 10 de julio de 2018 Cédula: ⁵⁶ 11 de julio de 2018 Plazo: 12 al 18 de julio de 2018	Sin respuesta

VIII. Diligencia. Mediante acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho,⁵⁷ se determinó requerir al *PT*, se sirviera proporcionar información relacionada con los medios de prueba aportados por las quejas Martha Araceli Coronado Coronado y Agapita Borge Cruz, lo cual fue desahogado conforme a lo siguiente:

⁴⁵ Visible a página 642 del expediente.

⁴⁶ Visible a páginas 643-647 del expediente.

⁴⁷ Visible a páginas 648-649 del expediente.

⁴⁸ Visible a páginas 654-655 del expediente.

⁴⁹ Visible a páginas 656-658 del expediente.

⁵⁰ Visible a página 662 del expediente.

⁵¹ Visible a páginas 663-666 del expediente.

⁵² Visible a páginas 667-668 del expediente.

⁵³ Visible a páginas 672-678 del expediente.

⁵⁴ Visible a página 687 del expediente.

⁵⁵ Visible a páginas 680-682 del expediente.

⁵⁶ Visible a páginas 685-686 del expediente.

⁵⁷ Visible a páginas 697-702 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GOP/JD03/BC/37/2018

Sujeto	Oficio-Fecha de notificación	Oficio-Fecha de respuesta
PT	INE-UT/12242/2018 ⁵⁸ 06 de agosto de 2018	REP-PT-INE-PVG-400/2018 ⁵⁹ 10 de agosto de 2018

IX. Elaboración de proyecto. En su oportunidad, toda vez que no había diligencias pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la Comisión de Quejas y Denuncias.

X. Sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias. En la Octogésima Cuarta Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el seis de septiembre de dos mil dieciocho, la *Comisión* resolvió el presente proyecto, en lo general por unanimidad de votos de sus integrantes, y en lo particular, por mayoría de dos votos de la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela Herrera y del Consejero Electoral Benito Nacif Hernández, con el voto en contra de la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala Pérez, por cuanto a la individualización de la sanción, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el

⁵⁸ Visible a página 705 del expediente.

⁵⁹ Visible a páginas 709-712 del expediente.

diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIFE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte del *PT*, en perjuicio de los ciudadanos que han sido señalados a lo largo de la presente determinación.

Ahora bien, conforme al artículo 23 del COFIPE, los partidos políticos ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en el citado Código, correspondiendo al Instituto Federal Electoral —hoy INE— vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n); y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho Código, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38 del dispositivo legal en cita, las cuales son sancionables por el Consejo General.

Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443 párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la *LGIFE* y 25 de la *LGPP*, respectivamente.

En consecuencia, siendo atribución del *Consejo General* conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta competente para conocer y resolver respecto de las presuntas infracciones denunciadas en el procedimiento sancionador ordinario, atribuidas al *PT*, derivado, esencialmente, de la afiliación indebida al citado instituto político.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,⁶⁰ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

⁶⁰ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de ciudadanos.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIPE* —los cuales contienen reglas que ya se encontraban previstas en el COFIPE, en los artículos 342, párrafo 1, incisos a); 356, 361, 364, 365 y 366—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO

En el presente asunto se debe subrayar que las presuntas faltas (afiliación indebida) se cometieron **durante la vigencia del COFIPE**, puesto que en **cuatro casos** (Graciela Ortiz Pablo, Gregoria Anguamea Arenas, Mario Alberto Carrillo López y Agapita Borges Cruz) la afiliación y/o desafiliación de los quejosos al *PT* se realizó en la temporalidad en la cual se encontraba vigente dicho código.

En efecto, de conformidad con lo establecido en el Punto cuarto de los Lineamientos para la Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su registro, aprobados por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG617/2012, de treinta de agosto de dos mil doce, los Partidos Políticos Nacionales debían capturar en el *Sistema de*

Cómputo desarrollado por la Unidad Técnica de Servicios de Informática, los datos de todos sus afiliados en el periodo comprendido **entre el uno de abril de dos mil trece y el treinta y uno de marzo de dos mil catorce**, siendo que, precisamente, a ese periodo corresponden algunas de las fechas de alta de los quejosos al *PT*.

Por tanto, si al momento de la comisión de las presuntas faltas se encontraba vigente el COFIPE,⁶¹ es claro que este ordenamiento legal debe aplicarse para las cuestiones sustantivas del presente procedimiento, al margen que las faltas pudieran haber sido advertidas por los quejosos y cuestionadas mediante las quejas que dieron origen al presente asunto, una vez que dicha norma fue abrogada por la LGIPE, así como que este último ordenamiento sea fundamento para cuestiones procesales o adjetivas.

No obstante, para los casos correspondientes a **nueve** ciudadanos (Asthur Azael Vela Sulu, Hugo Fernando Mafun Gómez, Elia Molina Vargas, Ma. de Lourdes De La Cruz Sánchez, Martha Araceli Coronado Coronado, Juan Arias Presenda, Domitilo López de la Cruz, Huitzilihuitl Acosta Ortega y Judith Soto Villarreal), la normatividad aplicable será la *LGIPE*, toda vez que sus afiliaciones u omisión de desafiliación se realizaron durante la vigencia de este cuerpo normativo.

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO

1. LITIS

En el presente asunto se debe determinar si *PT* afilió indebidamente a aquellos ciudadanos que sostienen que nunca dieron su consentimiento para que esto ocurriera, así como dilucidar si el mencionado partido violó el derecho de libertad de afiliación en su vertiente de no permitir o dar curso a las solicitudes de desafiliación presentada por ciudadanos, en ambos supuestos, haciendo uso ilegítimo de su información personal, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran

⁶¹ El COFIPE estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce.

replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*.

2. MARCO NORMATIVO

A) Constitución, tratados internacionales y ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

“Artículo 6

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

...

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.”

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la *Constitución*, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto

en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 de la *Constitución*— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafilarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 24/2002, emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro ***DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES***.⁶²

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,⁶³ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos

⁶² Consultable en la página del *Tribunal Electoral* o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

⁶³ Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes —asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación

política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

“Artículo 23. Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:

I...

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:

- 1.** Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:
 - a.** En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y
 - b.** El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.”

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales publicada el treinta de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, inciso a) que era un requisito para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el

número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que, en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;
- Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
- Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGIPE*, que es obligación de

los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su constitución y registro.

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.
- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados

que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.

- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que, en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno

significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los documentos necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión

de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna del *PT*

A efecto de tener claridad acerca del proceso que un ciudadano debe llevar a cabo para convertirse en militante del *PT*, se hace necesario analizar su norma interna, para lo cual, enseguida se transcribe la parte conducente de sus Estatutos consiste precisamente en el incumplimiento de sus propias normas de afiliación.⁶⁴

“Artículo 14.- Son militantes del Partido del Trabajo, los mexicanos, mujeres y hombres, que acepten y suscriban los Documentos Básicos y sus políticas específicas. Deberán participar activa y permanentemente en una instancia del Partido del Trabajo y en una organización social y sus luchas. Deberán aplicar las líneas políticas del Partido, actuar con honestidad y disciplina y pugnar por conservar su unidad. Por tratarse de un Instituto Político Nacional, en el cual sus militantes, afiliados y simpatizantes participan en forma personal y voluntaria, además que el ejercicio de sus actividades políticas se encuentran consideradas en el Artículo 35 Constitucional, como prerrogativas de los ciudadanos; en consecuencia, en ningún momento la militancia de los mismos en el Partido del Trabajo, generará derechos laborales.

...

Artículo 17.- Son afiliados al Partido del Trabajo los mexicanos mujeres y hombres que acepten la Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos y colaboren con algunas tareas del partido, especialmente electorales...

...

Artículo 22.- Los requisitos de ingreso de afiliados al Partido del Trabajo son:

...

d) Presentar una solicitud de afiliación por escrito, a la instancia partidaria correspondiente.

e) Presentar una solicitud de ingreso de manera individual, libre y voluntaria ante la Comisión Ejecutiva Municipal, Delegacional, Estatal, del Distrito Federal y Nacional en su caso.

f) Cubiertos los requisitos, el Partido del Trabajo podrá aceptar la solicitud de ingreso y emitir la constancia de afiliación.

...

⁶⁴ Consultable en el portal oficial del *PT* o bien en la página electrónica: <http://www.partidodeltrabajo.org.mx/estatutos.php#iv>

Artículo 134. Los militantes y afiliados tienen plenamente garantizado el acceder a la información partidaria que no se encuentre clasificada como reservada o confidencial; será puesta a disposición mediante solicitud escrita en la cual se establezca el nombre del solicitante, el carácter de militante, afiliado o simpatizante, el domicilio para recibir notificaciones, la descripción clara y precisa de la información que solicita, y la forma en la cual prefiera le sea entregada, ya sea verbalmente, mediante copias certificadas, o si se tuviere, en medio magnético. Los militantes y afiliados en ejercicio del derecho a la información, tendrán como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra, la estimación, los ataques a la moral, a los derechos de terceros o que pudiesen provocar algún delito. Se considerará información clasificada como reservada o confidencial:

I.- La que determine la Comisión Ejecutiva Nacional con base en los siguientes criterios:

...

d) La información referente a los datos personales de los militantes o afiliados, así como de los candidatos del Partido, será considerada como confidencial.”

De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente:

- El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, fundamentalmente, en la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para decidir **libre e individualmente** si desean formar parte de los partidos y agrupaciones políticas.
- Afiliado o Militante es el ciudadano que libre, voluntaria e individualmente, acude a un partido político para solicitar su incorporación al padrón de militantes respectivo, a través de los documentos aprobados por los órganos partidistas correspondientes.
- Al *PT* podrán afiliarse los ciudadanos que, libre e individualmente, expresen su voluntad de integrarse al partido.
- Uno de los requisitos formales para afiliarse al PT, consiste en presentar una solicitud de afiliación por escrito, a la instancia partidista correspondiente.
- Para obtener la afiliación al partido de referencia, se requiere, además de ser ciudadano mexicano y expresar **su voluntad libre, individual y pacífica de afiliarse** al Partido, **suscribir personalmente** la solicitud de alta como militante.

- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- En términos de lo previsto en el artículo 16, párrafo segundo de la Constitución, toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán contemplar en sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos.

D) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la *Constitución*, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

3. CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE VIOLACIÓN AL DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante del *PT*, por regla general debe acudir a las instancias partidistas competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso el *PT*), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del *COFIPE*, precepto que, derivado de la reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la *LGPP*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que además los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y voluntaria.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la *Sala Superior*, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**,⁶⁵ donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia 21/2013, de rubro **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS**

⁶⁵ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

SANCIONADORES ELECTORALES,⁶⁶ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria⁶⁷ y como estándar probatorio.⁶⁸

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación⁶⁹ ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la *Sala Superior* consideró en la sentencia referida, que, para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

⁶⁶ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.

⁶⁷ Tesis de Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

⁶⁸ Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. Véase la nota 35.

⁶⁹ Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA**, **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO**.

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con fundamento en el diverso 441 de la *LG/PE*, lo que implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento ordinario sancionador una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberadamente la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

4. HECHOS ACREDITADOS Y PRECISIONES

Como se ha mencionado, las denuncias presentadas por los quejosos, versan sobre la supuesta violación a su derecho de libertad de afiliación, tanto en la modalidad de afiliación indebida de los ciudadanos como de no permitirles ser desafiliados del PT, así como la utilización de sus datos personales por dicho partido político.

Ahora bien, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de la infracción denunciada, en los siguientes cuadros se resumirá, por cada uno de los denunciantes, la información derivada de la investigación preliminar implementada, así como las conclusiones que, en cada caso, fueron advertidas:

No	Ciudadana	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP ⁷⁰	Manifestaciones del Partido Político
1	Graciela Ortiz Pablo	23 de enero de 2018 ⁷¹	Afiliada 12/11/2013	REP-PT-INE-PVG-095/2018 ⁷² ...no se tiene documentación soporte debido a que todavía se está en búsqueda de los mismos...

⁷⁰ Visible a páginas 115 a 116 del expediente.

⁷¹ Visible a página 2 del expediente.

⁷² Visible a páginas 503-505 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GOP/JD03/BC/37/2018

No	Ciudadana	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP ⁷⁰	Manifestaciones del Partido Político
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP ⁷³	Manifestaciones del Partido Político
2	Asthur Azael Vela Sulu	17 de enero de 2018 ⁷⁴	Afiliado 12/01/2015	REP-PT-INE-PVG-146/2018 ⁷⁵ ...si está afiliado y se encuentra en búsqueda copia simple de la credencial para votar del ciudadano en cuestión...Se dio de alta el pasado día doce de enero del año dos mil quince y se encuentra en búsqueda del expediente del ciudadano antes mencionado...
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadana	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP ⁷⁶	Manifestaciones del Partido Político
3	Gregoria Anguamea Arenas	10 de enero de 2018 ⁷⁷	Afiliada 17/01/2014	REP-PT-INE-PVG-095/2018 ⁷⁸ ...no se tiene documentación soporte debido a que todavía se está en búsqueda de los mismos...

⁷³ Visible a páginas 115 a 1116 del expediente.

⁷⁴ Visible a página 8 del expediente.

⁷⁵ Visible a páginas 601-602 del expediente.

⁷⁶ Visible a páginas 115 a 116 del expediente.

⁷⁷ Visible a página 18 del expediente.

⁷⁸ Visible a páginas 503-505 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GOP/JD03/BC/37/2018

No	Ciudadana	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP ⁷⁶	Manifestaciones del Partido Político
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP ⁷⁹	Manifestaciones del Partido Político
4	Hugo Fernando Mafun Gómez	01 de diciembre de 2017 ⁸⁰	Registro cancelado 04/12/2017 Afiliado 28/10/2010	REP-PT-INE-PVG-095/2018 ⁸¹ ...no se tiene documentación soporte debido a que todavía se está en búsqueda de los mismos...
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadana	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP ⁸²	Manifestaciones del Partido Político
5	Elia Molina Vargas	24 de enero de 2018 ⁸³	Registro cancelado 04/12/2017 Afiliada 28/10/2010	REP-PT-INE-PVG-095/2018 ⁸⁴ ...no se tiene documentación soporte debido a que todavía se está en búsqueda de los mismos...

⁷⁹ Visible a páginas 115 a 1116 del expediente.

⁸⁰ Visible a página 23 del expediente.

⁸¹ Visible a páginas 503-505 del expediente.

⁸² Visible a páginas 115 a 116 del expediente.

⁸³ Visible a página 45 del expediente.

⁸⁴ Visible a páginas 503-505 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GOP/JD03/BC/37/2018

No	Ciudadana	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP ⁸²	Manifestaciones del Partido Político
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadana	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP ⁸⁵	Manifestaciones del Partido Político
6	Ma. de Lourdes De La Cruz Sánchez	09 de enero de 2018 ⁸⁶	Registro cancelado 11/01/2018 Afiliada 13/03/2008	REP-PT-INE-PVG-049/2018 ⁸⁷ Remitió copia certificada ⁸⁸ de formato de afiliación. ⁸⁹
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, no existe controversia en el sentido de que la denunciante está afiliada al PT.</p> <p>Es importante destacar que la ciudadana en su escrito de denuncia⁹⁰ manifestó, esencialmente: <i>Solo me ofrecieron tomar una foto para tener credencial del partido.</i></p> <p>Además, el PT aportó copia certificada de cédula de afiliación de la ciudadana (con firma), sin que esta haya sido objetada o controvertida por la quejosa, ya que de la vista que le fue formulada con las constancias atinentes, no se pronunció respecto a tal documental, al únicamente manifestar en vía de alegatos,⁹¹ lo siguiente: <i>Comparezco para ofrecer alegatos, los cuales son los siguientes que solicite la baja del partido al cual desconocía fuera ser afiliada por lo que quiero hacerle saber que esta situación afecta en mi empleo a desarrollar, por lo que requiero se atienda a dicha situación.</i></p>				

⁸⁵ Visible a páginas 115 a 116 del expediente.

⁸⁶ Visible a página 52 del expediente.

⁸⁷ Visible a páginas 342-343 y anexo de 344-356 del expediente.

⁸⁸ Los documentos aportados por el PT están certificados por Silvano Garay Ulloa, Secretario Técnico de la Comisión Ejecutiva Nacional del PT, quien en términos de lo previsto en los artículos 37 y 37 BIS I, incisos c) y d) del Estatuto vigente de ese instituto político. **“Artículo 37 Bis 1.** La Comisión Ejecutiva Nacional designará, un Secretario Técnico que tendrá las siguientes funciones: ... **c)** Certificar las actas y acuerdos de la Comisión Ejecutiva Nacional y de la Comisión Coordinadora Nacional cuando así se requiera. **d)** Certificar todos los documentos del Partido del Trabajo cuando así se requiera.” Consulta disponible en la dirección electrónica: <http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEPPP/DEPPP-DocumentosBasicos/DEPPP-DocumentosBasicos-pdfs/PT/ESTATUTOSPT.pdf>

⁸⁹ Visible a página 347 del expediente.

⁹⁰ Visible a página 51 del expediente.

⁹¹ Visible a página 501 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GOP/JD03/BC/37/2018

No	Ciudadana	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP ⁸⁵	Manifestaciones del Partido Político
<p>Esto es, al dar contestación a la vista de alegatos, la denunciante no controvertió el contenido de la documental aportada por el <i>PT</i>, habida cuenta que con tal constancia se le corrió traslado, a efecto de que se pronunciara al respecto en la etapa de alegatos, sin que objetara su autenticidad, así como tampoco su alcance y valor probatorio; lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de Quejas.</p> <p>Con base en lo expuesto, la existencia del referido documento, no es un hecho controvertido, al cual debe concederse el valor y eficacia probatoria plena.</p> <p>En consecuencia, la conclusión debe ser que NO se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadana	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP ⁹²	Manifestaciones del Partido Político
7	Martha Araceli Coronado Coronado	09 de enero de 2018 ⁹³	Registro cancelado 11/01/2018 Afiliada 31/03/2011	REP-PT-INE-PVG-049/2018 ⁹⁴ Remitió copia certificada de formato de afiliación. ⁹⁵
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente en el apartado denominado CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE VIOLACIÓN AL DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO, no existe controversia en el sentido de que la afectada se afilió al <i>PT</i>.</p> <p>La denunciante en su escrito de queja argumentó que presentó...<i>una carta al INE que me extendieron en el PT en la que hace constar la desafiliación del Partido del Trabajo, sin embargo, el INE me ha notificado que sigo afiliado al partido lo cual desconozco porque en el Proceso Electoral 2014-2015 participe como capacitadora electoral.</i></p> <p>De igual forma, en su escrito de desconocimiento de afiliación manifestó lo siguiente: <i>Que en el año 2014 Proceso Electoral 2014-2015 participe como capacitadora electoral laborando en el Distrito 1 de febrero a Julio del 2015 en la que presente al INE una carta que me extendió el PT en la que se hace constar la desafiliación del partido del trabajo.</i></p> <p>Es por ello que, se considera que, en el caso, se denunció una vulneración al derecho de libre afiliación en perjuicio de la denunciante, en su modalidad de no hacerle efectivo su derecho de desafiliación.</p> <p>La ciudadana aportó como medio de prueba escrito con firma autógrafa de Erick Giovanni Espino de la Rosa, signado en su carácter de Coordinador del PT, fechado el trece de enero de dos mil quince, expedido en Villa</p>				

⁹² Visible a páginas 115 a 116 del expediente.

⁹³ Visible a página 54 del expediente.

⁹⁴ Visible a páginas 342-343 y anexo de 344-356 del expediente.

⁹⁵ Visible a página 351 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GOP/JD03/BC/37/2018

No	Ciudadana	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP ⁹²	Manifestaciones del Partido Político
<p>de Ramos, San Luis Potosí, y con asunto Declaratoria de no afiliación, el cual se presenta en hoja blanca sin membrete del partido político denunciado, sello o cualquier otro distintivo de dicho instituto político.</p> <p>Al respecto, es importante destacar que, al dar contestación al emplazamiento, así como a la vista para formular alegatos, el <i>PT</i> no objeto la documental de referencia, ni emitió pronunciamiento alguno respecto a la misma.</p> <p>Además, el <i>PT</i> a requerimiento expreso de la autoridad sustanciadora del presente procedimiento sobre si Erick Giovanni Espinosa de la Rosa formaba parte de la estructura laboral o partidista de ese instituto político en enero de dos mil quince, se limitó a manifestar que negaba la relación laboral con ese sujeto.</p> <p>Particularmente, sobre el cuestionamiento de la razón por la que dio de baja de su padrón de afiliados a Martha Araceli Coronado Coronado el once de enero de dos mil dieciocho, dicho instituto político fue omiso en contestar.</p> <p>Esto es, el <i>PT</i> no contravirtió los argumentos esgrimidos por la denunciante, ni tampoco objeto la documentación aportada por la misma.</p> <p>En consecuencia, la conclusión debe ser que Sí se actualiza una violación al derecho a la libre afiliación en su vertiente de no permitir a una ciudadana ser desafiliada.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP ⁹⁶	Manifestaciones del Partido Político
8	Juan Arias Presenda	17 de enero de 2018 ⁹⁷	Registro cancelado 18/01/2018 Afiliado 10/11/2012	REP-PT-INE-PVG-049/2018 ⁹⁸ Remitió copia certificada de formato de afiliación. ⁹⁹
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, no existe controversia en el sentido de que el denunciante está afiliado al <i>PT</i>.</p> <p>El <i>PT</i> aportó copia certificada de cédula de afiliación del ciudadano (con firma), sin que esta haya sido objetada o controvertida por el quejoso, al no dar contestación a la vista que le fue formulada con las constancias atinentes, sobre la cual no se pronunció.</p> <p>En consecuencia, la conclusión debe ser que NO se trata de una afiliación indebida.</p>				

⁹⁶ Visible a páginas 115 a 116 del expediente.

⁹⁷ Visible a página 64 del expediente.

⁹⁸ Visible a páginas 342-343 y anexo a páginas 344-356 del expediente.

⁹⁹ Visible a página 356 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GOP/JD03/BC/37/2018

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁰⁰	Manifestaciones del Partido Político
9	Domitilo López de la Cruz	11 de enero de 2018 ¹⁰¹	Registro cancelado 18/01/2018 Afiliado 12/02/2009	REP-PT-INE-PVG-049/2018 ¹⁰² No se encontró registro alguno

Conclusiones

Aun cuando el PT niega que el ciudadano estuviera afiliado a dicho partido político, lo cierto es que se detectó su registro como militante del mismo, sin que el PT aportara las respectivas documentales o medios de prueba que demostraran que, en algún momento, el ciudadano manifestó su voluntad de afiliarse, ello con independencia que su estatus aparezca actualmente como cancelado, habida cuenta que está demostrado que en un momento determinado, el hoy quejoso perteneció al partido y éste no pudo demostrar que lo hizo de forma voluntaria.

Es por ello que la conclusión debe ser que **SÍ** se trata de una **afiliación indebida**.

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁰³	Manifestaciones del Partido Político
10	Mario Alberto Carrillo López	26 de enero de 2018 ¹⁰⁴	Afiliado 14/05/2014	REP-PT-INE-PVG-095/2018 ¹⁰⁵ <i>...no se tiene documentación soporte debido a que todavía se está en búsqueda de los mismos...</i>

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.

Es por ello que la conclusión debe ser que **SÍ** se trata de una **afiliación indebida**.

¹⁰⁰ Visible a páginas 115 a 116 del expediente.

¹⁰¹ Visible a página 68 del expediente.

¹⁰² Visible a páginas 342-343 y anexo de 344-356 del expediente.

¹⁰³ Visible a páginas 65 a 66 del expediente.

¹⁰⁴ Visible a página 76 del expediente.

¹⁰⁵ Visible a páginas 503-505 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GOP/JD03/BC/37/2018

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁰⁶	Manifestaciones del Partido Político
11	Huitzilihuitl Acosta Ortega	Enero de 2018 ¹⁰⁷	Afiliado 21/12/2014	REP-PT-INE-PVG-095/2018 ¹⁰⁸ ...no se tiene documentación soporte debido a que todavía se está en búsqueda de los mismos...
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadana	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁰⁹	Manifestaciones del Partido Político
12	Judith Soto Villarreal	08 de enero de 2018 ¹¹⁰	Afiliada 31/12/2014	REP-PT-INE-PVG-095/2018 ¹¹¹ ...no se tiene documentación soporte debido a que todavía se está en búsqueda de los mismos...
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>				

¹⁰⁶ Visible a páginas 115 a 116 del expediente.

¹⁰⁷ Visible a página 82 del expediente.

¹⁰⁸ Visible a páginas 503-505 del expediente.

¹⁰⁹ Visible a páginas 157 a 158 del expediente.

¹¹⁰ Visible a página 88 del expediente.

¹¹¹ Visible a páginas 503-505 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GOP/JD03/BC/37/2018

No	Ciudadana	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP ¹¹²	Manifestaciones del Partido Político
13	Agapita Borges Cruz	06 de febrero de 2018 ¹¹³	Afiliada 22/09/2011	REP-PT-INE-PVG-095/2018 ¹¹⁴ ...no se tiene documentación soporte debido a que todavía se está en búsqueda de los mismos...

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente en el apartado denominado **CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE VIOLACIÓN AL DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO**, no existe controversia en el sentido de que la afectada se afilió al *PT*.

La denunciante en su escrito de queja argumentó que...**con fecha de 26 de enero de 2015 presente renuncia en la oficina estatal del partido del trabajo**, la cual me recibió firmó y selló Ricardo Bautista Oscoy, todo esto por la notificación de la Junta Distrital Ejecutiva, la cual me informaba que mediante solicitud de información efectuada en la base de datos de los Partidos Políticos Nacionales, en el cual aparezco como militante afiliado al Partido del Trabajo lo cual desconozco, ya que en la fecha mencionada presente documento mencionado que anexo...

Es por ello que, se considera que, en el caso, se denunció una vulneración al **derecho de libre afiliación** en perjuicio de la denunciante, **en su modalidad de no hacerle efectivo su derecho de desafiliación**.

La ciudadana aportó como medio de prueba copia simple de escrito con firma de Ricardo Bautista Oscoy, Responsable del Departamento de Afiliación del Partido del Trabajo en el estado de Hidalgo, fechado el treinta de noviembre de dos mil quince, expedido en Pachuca de Soto, Hidalgo, con membrete del partido político denunciado y sello del mismo. Asimismo, en tal documento se aprecia el sello de acuse por parte de la 03 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Hidalgo, con fecha 02 de diciembre de 2015.

Al respecto, es importante destacar que, al dar contestación al emplazamiento, así como a la vista para formular alegatos, el *PT* no objeto la documental de referencia, ni emitió pronunciamiento alguno respecto a la misma.

Esto es, el *PT* no controvertió los argumentos esgrimidos por la denunciante, ni tampoco objeto la documentación aportada por la misma.

En consecuencia, la conclusión debe ser que **SÍ se actualiza una violación al derecho a la libre afiliación en su vertiente de no permitir a una ciudadana ser desafiliada**.

Por lo que hace a las constancias aportadas por la *DEPPP*, al ser documentos emitidos por autoridades dentro del ámbito de sus facultades, se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del *Reglamento de Quejas*, mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462,

¹¹² Visible a páginas 115 a 116 del expediente.

¹¹³ Visible a página 94 del expediente.

¹¹⁴ Visible a páginas 503-505 del expediente.

párrafo 2 de la *LGIPE* y 27, párrafo 2 del Reglamento citado; por tanto, tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

En el mismo tenor, las documentales allegadas al expediente por el partido político denunciado, así como las aportadas por los denunciantes, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracción II del *Reglamento Quejas*; por lo que, por sí mismas, carecen de valor probatorio pleno, y sólo alcanzarán ese grado cuando, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, generen convicción en este *Consejo General* sobre la veracidad de los hechos a que se refieren, ello al tenor de lo preceptuado en los artículos 462, párrafo 3 de la *LGIPE*, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención.

5. CASO CONCRETO

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por los quejosos, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5 del *COFIPE*, cuyo contenido se replica en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; esto es, partido político, candidato o inclusive cualquier persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta

(elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

Ahora bien, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, la autoridad debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

En principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento que formula en contra de la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde al quejoso.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 de la *LGIE*.

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que contaba con el consentimiento de los quejosos para afiliarlos a su partido

político, y no a los ciudadanos que negaron haber solicitado su inclusión en el padrón de militantes del PT.

Así, como vimos, en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, está demostrado a partir de la información proporcionada por la DEPPP que los ciudadanos denunciados se encontraron, en ese momento, como afiliados del PT.

Por otra parte, el PT no demuestra con medios de prueba, que la afiliación respectiva sea el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de los ciudadanos, en los cuales, ellos mismos, *motu proprio*, expresaron su consentimiento y, por ende, proporcionaron sus datos personales a fin de llevar a cabo la afiliación a dicho instituto político.

Debiendo precisar que la carga de la prueba corresponde al PT, en tanto que el dicho de los actores consiste en demostrar que no dieron su consentimiento para ser afiliados, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba.

En tanto que los partidos políticos, cuya defensa consiste básicamente en afirmar que sí cumplieron las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación, tienen el deber de probar esa situación.

Ahora bien, tal y como quedó de manifiesto en el apartado del *MARCO NORMATIVO* de la presente Resolución, así como en el correspondiente a *CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE VIOLACIÓN AL DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO*, la libertad de afiliación en materia político-electoral, es un derecho reconocido y así garantizado para todo ciudadano de nuestro país, al menos desde hace varias décadas, tanto a nivel constitucional como legal, el cual es concebido como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido político, permanecer afiliado a éste, desafiliarse e, incluso, no pertenecer a ninguno. Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección de datos personales e información relacionada con la vida privada de las personas, es igualmente un derecho con una trayectoria de protección por demás lejana.

En este sentido, es pertinente dejar en claro que la garantía y protección a los citados derechos, evidentemente no deriva de disposiciones reglamentarias al

interior de los institutos políticos, que prevean como obligación del partido político, la conservación de los expedientes de afiliación de cada miembro, ni tampoco a partir de la emisión de los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, emitidos por el propio INE en la Resolución CG617/2012, sino que, como se vio, el derecho tutelado deviene de disposiciones de rango supremo, el cual debe ser tutelado en todo momento, y no a partir de normas internas o reglamentarias que así lo establezcan.

En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos políticos es un derecho de los ciudadanos previsto como garantía constitucional en nuestro país desde hace décadas, también lo es la obligación de los partidos políticos de preservar, y en su caso, de demostrar, en todo momento, que cualquier acto que engendre la voluntad de un ciudadano para formar parte en las filas de un instituto político, esté amparado en el o los documentos que demuestren indefectiblemente el acto previo del consentimiento, siendo **ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no se tiene o tenía el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes.**

Lo anterior, porque, como se mencionó, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que, de manera insuperable, el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En este sentido, toda vez que los denunciantes denuncian al *PT*, en algunos casos por una afiliación indebida y, en otros, por la omisión a darlos de baja de su padrón de afiliados, el estudio de fondo del presente asunto se realizará en dos apartados:

Apartado A. Ciudadanos sobre los que Sí se violó su derecho a la libre afiliación en su vertiente de no permitirles ser desafiliados

Respecto a **Martha Araceli Coronado Coronado** y **Agapita Borges Cruz**, el presente procedimiento sancionador ordinario es **FUNDADO** en contra del *PT*, por las razones y consideraciones siguientes:

De conformidad con lo asentado en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, está demostrado, a partir de la información proporcionada por la *DEPPP* y el propio instituto político denunciado, que **Agapita Borges Cruz** se encuentra afiliada al *PT*.

Por lo que hace a **Martha Araceli Coronado Coronado**, el partido político denunciado realizó la cancelación del registro de la ciudadana el once de enero de dos mil dieciocho.

No obstante, **Martha Araceli Coronado Coronado** y **Agapita Borges Cruz**, se inconformaron por la negativa del *PT* de desincorporarlas de su padrón de militantes, aún y cuando presentaron previamente ante ese instituto político los correspondientes escritos en los que, cada una de ellas, hizo patente su petición de ser dadas de baja de los registros de afiliados, sin que esto hubiera ocurrido.

Así, en términos de la información que obra en autos se advierte que:

1. No está a debate que, en algún momento, **las ciudadanas se afiliaron libre y voluntariamente al PT**, con base en sus propias manifestaciones.
2. **Martha Araceli Coronado Coronado** manifestó que presentó...*una carta al INE que me extendieron en el PT en la que hace constar la desafiliación del Partido del Trabajo, sin embargo, el INE me ha notificado que **sigo afiliado al partido lo cual desconozco** porque en el Proceso Electoral 2014-2015 participe como capacitadora electoral*, adjuntando el original del referido documento.
3. **Martha Araceli Coronado Coronado** manifestó que...*en el año 2014 Proceso Electoral 2014-2015 participe como capacitadora electoral laborando en el Distrito 1 de febrero a Julio del 2015 en la que presente al INE una carta que me extendió el PT en la que se hace constar la desafiliación del partido del trabajo*.
4. **Agapita Borges Cruz** manifestó que ...*con fecha de 26 de enero de 2015 presente renuncia en la oficina estatal del partido del trabajo, la cual me*

recibió firmó y selló Ricardo Bautista Osoy, adjuntando copia simple del referido documento.

5. Conforme a la información proporcionada por la *DEPPP*, **se advirtió que el registro de afiliación de Martha Araceli Coronado Coronado fue cancelado por el PT el once de enero de dos mil dieciocho.**
6. Conforme a la información proporcionada por la *DEPPP*, se advirtió que, al veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, **Agapita Borges Cruz apareció en el padrón de militantes del PT con afiliación válida**, de conformidad con la información extraída del *Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos*, capturados por el propio partido político, con corte al treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, con el propósito de acreditar el número mínimo de afiliados para la conservación de su registro.

Con base en las anteriores conclusiones, esta autoridad considera que el partido incurrió en una violación al derecho de libertad de afiliación política, en su modalidad de **no permitir la desincorporación de estas ciudadanas como sus militantes**, en perjuicio de las hoy quejas, con motivo de la omisión o falta de cuidado en darlas de baja de su padrón de afiliados, previa solicitud que por escrito se le formuló con ese propósito.

En efecto, tal y como se ha referido en el apartado de marco normativo de la presente Resolución, todo ciudadano mexicano tiene derecho a asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III y 41, párrafo segundo Bases I, párrafo segundo *in fine*, y IV, de la *Constitución*, así como 5°, párrafo 1, del *COFIPE*, este último replicado en el diverso 3, párrafo 2, de la *LGPP*.





Así, en ejercicio del derecho de asociación en materia político-electoral, los ciudadanos pueden formar partidos y agrupaciones políticas, cumpliendo para ello con los requisitos que establece la ley.

En este contexto, la libertad de asociación política constituye la base de la formación de los partidos, de manera que, en ejercicio de esa potestad, todo ciudadano, por igual, puede formar parte de ellos bajo la condición de cumplir con los requisitos que establece la norma, pudiendo también, en consonancia con esa libertad, tener la posibilidad de **desafiliarse** de éste en el momento que así lo desee.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GOP/JD03/BC/37/2018

Con base en ello, se considera que existirá violación a la libertad de afiliación, por parte de un partido político, cuando sin mediar justificación alguna, mantiene en contra de su voluntad a un ciudadano dentro de su padrón de afiliados, toda vez que dichas personas morales, en su calidad de entidades de interés público, en términos del numeral 41, Base I, de la *Constitución* tienen el deber irrestricto de garantizar el libre ejercicio de derechos fundamentales de todos los ciudadanos, entre ellos, los relativos a la libertad de afiliación política y, al no actuar de esta forma, evidentemente afecta su esfera jurídica, al relacionarlos con una fuerza política a la que ya no quieren pertenecer, siendo que su derecho a terminar el vínculo que los unía con el partido se vio afectado.

Como se mencionó, de las constancias que integran el expediente citado al rubro, se advierte que **Martha Araceli Coronado Coronado** y **Agapita Borges Cruz** presentaron escritos expedidos por el *PT*, tal y como se aprecia a continuación:

ESCRITO DE MARTHA ARACELI CORONADO CORONADO ESCRITO DE DESAFILIACIÓN DE 2014	ESCRITO DE AGAPITA BORGES CRUZ ESCRITO DE RENUNCIA DE 26 DE ENERO DE 2015
<p style="text-align: center;">VILLA DE RAMOS, S.L.P. A 13 DE ENERO DEL 2015</p> <p style="text-align: center;">ASUNTO: <u>DECLARATORIA DE</u> <u>NO AFILIACION.</u></p> <p>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PRESENTE.-</p> <p>Por medio de la presente me dirijo a Usted de la manera más atenta, para NOTIFICAR que la Ciudadana MARTHA ARACELI CORONADO CORONADO, no pertenece a este Partido Político PT (Partido del Trabajo), asimismo reiterándole que no se encuentra afiliada al mismo.</p> <p>Sin otro asunto en particular, reciba un cordial saludo.</p> <p style="text-align: center;">ATENTAMENTE.</p> <p style="text-align: center;">_____ L.E.P. ERICK GIOVANNI ESPINO DE LA ROSA COORDINADOR DE PT</p>	<p style="text-align: center;"> PARTIDO DEL TRABAJO UNIDAD NACIONAL ¡TODO EL PODER AL PUEBLO!</p> <p style="text-align: right;">Pachuca de Soto, Hgo. A 30 de Noviembre de 2015</p> <p>A QUIEN CORRESPONDA PRESENTE</p> <p>Por medio del presente documento el Partido Del Trabajo en Hidalgo hace de su conocimiento que la <u>C. AGAPITA BORGES CRUZ</u>, del municipio de  n clave de elector  sentó su renuncia el día 26 de Enero de 2015, por lo que certifica que no se encuentra registrada en nuestra base de datos de afiliados de nuestro partido y se descarta cualquier relación política</p> <p>Sin más por el momento le envío un afectuoso saludo.</p> <p style="text-align: right;"></p> <p style="text-align: center;">_____ LIC. RICARDO BAPTISTA OSCOY RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN DEL PARTIDO DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE HIDALGO</p>

Así, de conformidad con las constancias que fueron acompañadas por las partes en el procedimiento, se considera que el presente procedimiento debe declararse **FUNDADO**, lo anterior, porque el partido político denunciado no manifestó ni mucho

menos acreditó la causa, motivo o razón por la cual mantuvo en su registro a **Agapita Borges Cruz**, y, en el caso de **Martha Araceli Coronado Coronado**, por lo menos al once de enero de dos mil dieciocho, dentro de un padrón de afiliados al cual no desean pertenecer.

Lo anterior es así, toda vez que, como ya se anunció, al tratarse de un ente de interés público, está obligado, entre otras cosas, a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; al tenor de lo dispuesto en el inciso a) del párrafo 1, del artículo 25 de la *LGPP*.

En este sentido y de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales que le son aplicables, el *PT*, debió garantizar el ejercicio fundamental de libre afiliación política, en todas sus vertientes, incluida por supuesto el de desafiliación de sus agremiados, razón por la cual no puede constituir una justificación el que se argumente que no se hayan cumplido con el proceso interno de dicho instituto político, siendo que ni siquiera, acreditó que la ciudadana de referencia estuvo en condiciones de imponerse ante el mismo, en los términos ya apuntados.

La anterior conclusión tiene sustento en la Tesis de Jurisprudencia **29/2002**,¹¹⁵ cuyo rubro y texto es al tenor literal siguiente:

“DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA.

Interpretar en forma restrictiva los derechos subjetivos públicos fundamentales de asociación en materia política y de afiliación política electoral consagrados constitucionalmente, implicaría desconocer los valores tutelados por las normas constitucionales que los consagran, así cabe hacer una interpretación con un criterio extensivo, toda vez que no se trata de una excepción o de un privilegio, sino de derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados, no restringidos ni mucho menos suprimidos. En efecto, los derechos fundamentales de carácter político-electoral consagrados constitucionalmente, como los derechos de votar, ser votado, de asociación y de afiliación, con todas las facultades inherentes a tales derechos, tienen como principal fundamento promover la democracia

¹¹⁵ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=29/2002&tpoBusqueda=S&sWord=29/2002>

representativa, habida cuenta que, conforme con lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa y democrática. Lo anterior, en virtud de que las reglas interpretativas que rigen la determinación del sentido y alcances jurídicos de una norma no permiten que se restrinja o haga nugatorio el ejercicio de un derecho fundamental, como lo son los de asociación política y de afiliación político-electoral; por el contrario, toda interpretación y la correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus alcances jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que aquélla esté relacionada con un derecho fundamental. Lo anterior, desde luego, no significa en forma alguna sostener que los derechos fundamentales de carácter político sean derechos absolutos o ilimitados.”

Por tanto, se concluye que el derecho fundamental de desafiliación de los denunciantes debió ser garantizado por el *PT*, habida cuenta que su goce y ejercicio no es una prerrogativa cuya disponibilidad quede a cargo del partido político denunciado, sino exclusivamente de los ciudadanos.

Sirve de apoyo a los anteriores argumentos, lo establecido en la Tesis de Jurisprudencia **24/2002**,¹¹⁶ del *Tribunal Electoral*, de rubro y texto siguientes:

“DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES.- El derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 5o., párrafos 1 y 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas, y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios y, por tanto, con mayor especificidad que el derecho de asociación y está garantizado jurisdiccionalmente mediante el sistema de medios de impugnación en materia electoral previsto en el artículo 41, fracción IV, primer párrafo, in fine, en relación con lo dispuesto en el artículo 99, fracción V, de la Constitución federal. Además, el derecho de afiliación comprende

¹¹⁶ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GOP/JD03/BC/37/2018

no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también la prerrogativa de pertenecer a éstos con todos los derechos inherentes a tal pertenencia; en particular, el derecho fundamental de afiliación político-electoral consagrado constitucionalmente faculta a su titular para afiliarse o no libremente a un determinado partido político, conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.”

A fin de dar mayor claridad a la presente Resolución, enseguida se esquematiza el tiempo transcurrido entre la fecha en que los hoy denunciantes presentaron ante el partido su escrito de desafiliación y en el momento que se presentó la queja que dio origen al presente asunto.

Quejosa	Fecha de desconocimiento de afiliación y/o renuncia	Estatus
Martha Araceli Coronado Coronado	2014 ¹¹⁷	Registro cancelado el 11 de enero de 2018
Agapita Borges Cruz	26 de enero de 2015 ¹¹⁸	Vigente al 21 de febrero de 2018 ¹¹⁹

Por lo anterior, este órgano colegiado considera pertinente declarar **fundado** el presente procedimiento, por lo que hace al presente apartado, pues se concluye que el *PT* infringió las disposiciones electorales al no desafiliar a **Agapita Borges Cruz y Martha Araceli Coronado Coronado**, esta última de manera oportuna, y no obstante las respectivas renunciaciones que estas presentaron ante dicho instituto político, violentando así su derecho de afiliación política, en su modalidad de no hacer efectiva su desafiliación, aunado a que para tal fin, utilizó sus datos personales de forma indebida.

¹¹⁷ Visible a página 57 del expediente.

¹¹⁸ Visible a página 97 del expediente.

¹¹⁹ Conforme a la información proporcionada por al *DEPPP*, a través de correo electrónico enviado el 21 de febrero de 2018. Visible a páginas 115-116 (ambos lados) del expediente.

Esto es así, porque la presentación de escritos de renuncia o solicitudes de baja, generan, en automático, una serie de cargas y obligaciones para el respectivo partido político, a fin de hacer efectivo el ejercicio de ese derecho fundamental; a saber:

- Debe recibir las solicitudes de renuncia o escritos por los que se solicita la baja de su padrón, sin poner trabas o barreras injustificadas para ello.

Es decir, en ningún caso puede negarse a recibir o atender este tipo de solicitudes. Al contrario, debe remover todo obstáculo que impida o dificulte al ciudadano su presentación; incluso, debe establecer las condiciones necesarias para orientar a su militancia y dar cauce efectivo a las peticiones de esta índole.

Cuando un órgano partidista no competente reciba una solicitud de baja o renuncia a la militancia deberá, de manera inmediata y sin mayor trámite, remitirlo al órgano partidario que resulte competente para su atención.

- El órgano partidista competente deberá atender de inmediato, sin dilaciones o retrasos injustificados, las solicitudes de desafiliación que se presenten y, consecuentemente, dar de baja de su padrón al o el petionario en un plazo razonable.
- Cuando sea necesario que el o la interesado tengan conocimiento de un acto partidista relacionado con su solicitud de desafiliación, **deberá notificarlo personalmente a la o el interesado** en un tiempo breve y razonable. Ello conforme las razones esenciales de las Tesis de Jurisprudencia **32/2010**¹²⁰ y **31/2013**,¹²¹ de rubros ***DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA EXPRESIÓN ‘BREVE TÉRMINO’ ADQUIERE CONNOTACIÓN ESPECÍFICA EN CADA CASO y DERECHO DE PETICIÓN. LA RESPONSABLE, DEBE INFORMAR AL PETICIONARIO CUANDO CONSIDERE QUE SU SOLICITUD NO REÚNE REQUISITOS CONSTITUCIONALES***, respectivamente.

¹²⁰ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=32/2010&tpoBusqueda=S&sWord=32/2010>

¹²¹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=31/2013&tpoBusqueda=S&sWord=31/2013>

Finalmente, no pasa inadvertido para este órgano resolutor, que **Agapita Borges Cruz y Martha Araceli Coronado Coronado** presentaron copia simple y original, respectivamente, del escrito mediante el cual demostraron su gestión ante el propio partido para ser desafiliada o, en su caso, constancia de desafiliación, lo cual, de suyo constituye una prueba documental privada, en términos de lo dispuesto en los artículos 461, párrafo 3, inciso b) de la *LGIPE* y 22, párrafo 1, fracción II, del *Reglamento de Quejas*.

Sin embargo, dichas documentales se estiman suficientes para tener por demostrada la solicitud de desafiliación aludida y, con base en ella, tener por acreditada la omisión del partido de atender esa petición, habida cuenta que con los documentos en cita, se corrió traslado al partido político denunciado a efecto de que se pronunciara al respecto en la etapa de emplazamiento de que fue objeto, sin que el *PT* objetara la autenticidad de los documentos base de los quejosos, así como tampoco su alcance y valor probatorio; lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de Quejas el cual establece, en lo que interesa, lo siguiente:

“Artículo 24
De la objeción

...

2. ...las partes podrán objetar la autenticidad de la prueba o bien su alcance y valor probatorio, debiendo indicar cuál es el aspecto que no se reconoce de la prueba o porque no puede ser valorado positivamente por la autoridad, esto es, el motivo por el que a su juicio no resulta idóneo para resolver un punto de hecho.

3. Para desvirtuar la existencia o verosimilitud de los medios probatorio ofrecidos, no basta la simple objeción forma de dichas pruebas, sino que es necesario señalar las razones concretas en que se apoya la objeción y aportar elementos idóneos para acreditarlas, mismos que tenderán a invalidar la fuerza probatoria de la prueba objetada.”

Esto es, de conformidad con el precepto reglamentario previamente transcrito, **no basta con objetar de manera formal el medio de prueba ofrecido por el partido político para desvirtuar la existencia o verosimilitud de la constancia de afiliación, sino que es necesario señalar las razones correctas en que se**

apoya la objeción y, también, aportar en el momento procesal oportuno, los elementos idóneos para acreditar su objeción.

Resulta aplicable al caso, la Tesis de Jurisprudencia 4/2005¹²² de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes:

“DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y PUEBLA, ESTA ÚLTIMA ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1998). En términos de lo dispuesto por los artículos 324 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 330 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, los documentos privados provenientes de las partes deben ser reconocidos expresa o tácitamente para que adquieran el valor probatorio que las propias legislaciones les otorgan. Ahora bien, **esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio reiterado de que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que es necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción.** Debido a que en las legislaciones adjetivas en cuestión no se establece ninguna regla específica sobre la carga probatoria en la hipótesis apuntada, para saber a quién corresponde dicha carga de la prueba sobre la objeción formulada, deben atenderse los hechos en que se funde la misma, aplicándose las reglas genéricas establecidas en los artículos 289 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 263 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, en cuanto a que **a cada parte corresponde probar los hechos de sus pretensiones. Por tanto, si la objeción de un documento privado proveniente de los interesados base de sus pretensiones se funda en la circunstancia de no haber suscrito el documento el objetante, a él corresponde la carga de la prueba.** Dicho de otra forma, **quien invoca una situación jurídica está obligado a probar los hechos fundatorios en que aquélla descansa; por lo contrario, quien sólo quiere que las cosas se mantengan en el estado que existen en el momento en que se inicia el juicio, no tiene la carga de la prueba, pues desde el punto de vista racional y de la lógica es evidente que quien pretende innovar y cambiar una situación actual, debe soportar la carga de la prueba.”**

[Énfasis añadido]

¹²² Jurisprudencia 1a./J. 4/2005, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, abril de 2005, Página 266.

Bajo ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió, en concordancia con los preceptos invocados en líneas que anteceden, que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que debe ser necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción, es decir, que al objetante corresponde la carga de la prueba.

A efecto de robustecer lo anterior, se citan criterios de diversos Tribunales Colegiados de Circuito, en los que se han pronunciado en tal sentido sobre el tema:

- ***DOCUMENTOS PRIVADOS. OBJECIÓN A LOS.***¹²³
- ***DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. CONFORME AL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA.***¹²⁴
- ***DOCUMENTOS PRIVADOS. PARA NEGARLES VALOR PROBATORIO, NO BASTA LA SIMPLE OBJECIÓN, SINO QUE DEBEN SEÑALARSE LAS CAUSAS EN QUE LA FUNDE Y DEMOSTRARLAS.***¹²⁵
- ***DOCUMENTOS PRIVADOS, CARGA DE LA PRUEBA EN CASO DE OBJECIÓN A LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).***¹²⁶
- ***DOCUMENTOS PRIVADOS. CARGA DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR LA OBJECIÓN RESPECTO DE LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA CONTENIDA EN ELLOS.***¹²⁷

¹²³ Jurisprudencia I.3Oc. J/8, Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, agosto de 1996, Página 423.

¹²⁴ Tesis Aislada XV.4o.12 C, Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, septiembre de 2009, Página 3128.

¹²⁵ Jurisprudencia III. 1Oc. J/17, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Número 63, marzo de 1993, Página 46.

¹²⁶ Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, agosto de 1993, Página 422.

¹²⁷ Tesis XXXI.3º 8 L, Tercer Tribunal Colegiado de Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, abril de 2002, Página 1254.

- **DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).**¹²⁸

De igual forma, resulta aplicable la Tesis de Jurisprudencia I.3o.C. J/11¹²⁹, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes:

“DOCUMENTOS PRIVADOS INSUFICIENTEMENTE OBJETADOS POR EL PROPIO FIRMANTE, VALOR PROBATORIO DE LOS. En tratándose de documentos privados, debe hacerse la distinción entre aquellos que provienen de terceras personas y los que se atribuyen a las partes litigantes en la controversia. Respecto de los primeros, basta la objeción del instrumento privado, debidamente razonada, para que pierda su valor probatorio, quedando a cargo del oferente la carga de la prueba y apoyar su contenido aportando otros elementos de convicción, y en relación con el segundo supuesto, para tener por satisfecho lo dispuesto por el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es menester que **la parte a quien perjudique realice en tiempo, forma y suficiencia la objeción, para que pierda su alcance probatorio dicho instrumento. De esta manera, se tiene que si en un caso la contraparte del oferente, al dársele vista con el documento exhibido, se limitó a manifestar que no lo había firmado, tal aseveración no pudo constituir la causa suficiente de objeción que demeritara el alcance de esa probanza, ya que para tal efecto resulta indispensable que existan causas motivadoras de la invalidez de la prueba y que se aportaran las pruebas idóneas para tal fin, como pudieron ser las periciales grafoscópicas, grafológicas y caligráficas;** elementos que no se rindieron para acreditar la impugnación, como lo dispone el artículo 341 del código citado.”

[Énfasis añadido]

En igual sentido, el Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito en la Tesis de Jurisprudencia III.1o.C. J/29¹³⁰, sostuvo el referido criterio en el siguiente sentido:

¹²⁸ Tesis II. o C, 495 C, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, septiembre de 2005, Página 1454.

¹²⁹ Tesis I.3o. C J/11, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre de 1997, Página 615.

¹³⁰ Jurisprudencia III.1o.C. J/29, Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Página 680.

“DOCUMENTOS PRIVADOS, PRUEBA DE LA FALSEDAD DE LA FIRMA DE LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Una interpretación armónica de los artículos 342, 343, 344, 345, 346 y 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, lleva a concluir que cuando **se objeta la autenticidad de la firma de un documento privado es necesario pedir el cotejo de la misma con una señalada como indubitable; además, debe ofrecerse la prueba pericial respectiva, dado que la falsificación de la firma es un punto que sólo puede ser determinado por una persona con conocimientos especiales en la materia, es decir, por un perito grafoscopista, aun cuando exista diferencia notoria entre las firmas cuestionadas, porque tal circunstancia, por sí sola, no revela lo apócrifo de una de ellas, sino únicamente la diferencia entre ambas.**”

[Énfasis añadido]

Lo anterior, en suma, significa que para destruir la presunción de inocencia que surge en favor del denunciado cuando aporta elementos de prueba idóneos para demostrar que la afiliación cuestionada estuvo precedida de la manifestación de voluntad del quejoso, tal como las constancias de afiliación correspondientes, o bien, elementos que pongan de manifiesto que el quejoso realizó hechos positivos derivados de su militancia, no basta que, de manera abstracta y genérica, el quejoso afirme que dichos medios de convicción no son veraces o auténticos.

Lo anterior, atento que, conforme a la normatividad que rige los procedimientos sancionadores electorales y que inexcusablemente está obligado a seguir este Consejo General, resulta imperativo que quien objeta un medio de prueba, señale específicamente cuál es la parte que cuestiona, y al efecto aporte, o cuando menos señale, conforme a la regla general relativa a que a quien afirma le corresponde probar —vigente en los procedimientos sancionadores electorales conforme a lo establecido por la Sala Superior—, los elementos objetivos y ciertos que puedan conducir a destruir la eficacia probatoria de los elementos aportados por el denunciado en su defensa, pues de otra manera, el principio de presunción de inocencia deberá prevalecer apoyado en las evidencias allegadas al procedimiento por el presunto responsable.

Con base en lo expuesto, se considera que debe concederse el valor y eficacia probatoria plena a las citadas documentales, ya que, con independencia de las razones expuestas en los párrafos que preceden, esta autoridad debe privilegiar y

garantizar el derecho de libertad de afiliación en favor del denunciante que constituye este apartado, debiendo sancionar al partido por la conducta que se declaró fundada, a efecto de evitar en casos futuros la repetición de conductas con la que nos ocupa.

En consecuencia, al determinarse que el *PT* infringió la norma electoral ya señalada, se declara **fundado** el presente procedimiento, por cuanto hace a la omisión de desafiliar a **Agapita Borges Cruz** y **Martha Araceli Coronado Coronado**, así como por el uso indebido de sus datos personales.

Apartado B. Ciudadanos que fueron afiliados indebidamente al *PT*

Respecto a los **nueve (9)** ciudadanos que se citan a continuación, el presente procedimiento sancionador ordinario es **FUNDADO** en contra del *PT*, por las razones y consideraciones siguientes:

No.	Denunciantes
1	Graciela Ortiz Pablo
2	Asthur Azael Vela Sulu
3	Gregoria Anguamea Arenas
4	Hugo Fernando Mafun Gómez
5	Elia Molina Vargas
9	Domitilo López De La Cruz
10	Mario Alberto Carrillo López
11	Huitzilihuitl Acosta Ortega
12	Judith Soto Villarreal

Es importante señalar que el *PT* **reconoció la afiliación** de militancia de los nueve (9) ciudadanos antes referidos.

No obstante, lo anterior, en ningún caso aportó las cédulas correspondientes, a fin de acreditar ante esta autoridad que el registro de los mismos aconteció de forma libre, individual, voluntaria, personal y pacífica y que además para llevar a cabo ese trámite se cumplió con los requisitos establecidos para tal efecto en su normatividad interna.

En efecto, se considera que, en el caso, el medio de prueba esencial para acreditar la debida afiliación de esos ciudadanos es la cédula o, en su caso, cualquier otra documentación establecida en la normatividad del *PT* en materia de afiliación, en la que constará el deseo de los ciudadanos a afiliarse a ese partido político, al estar impresa de su puño y letra, el nombre, firma, domicilio y datos de identificación, circunstancia que no aconteció, tal y como se estableció en párrafos precedentes.

Respecto a Domitilo López De la Cruz, cabe precisar que el ***PT* argumentó que, a la fecha, su registro de afiliación ha sido cancelado**, para lo cual, anexó copia certificada del escrito por el que le hizo del conocimiento la baja del padrón de afiliados correspondiente.

Es decir, el *PT* reconoce la afiliación del ciudadano en cita, esto es, existe una confesional por parte de dicho instituto político que cobra relevancia al caso, porque corrobora de una manera indirecta que Domitilo López De la Cruz fue registrado como afiliado del partido político denunciado.

Sin embargo, el partido político denunciado manifestó que, atento a su solicitud de darlo de baja de su padrón, procedió a llevar a cabo el procedimiento de desafiliación correspondiente, es por ello que, al momento, su registro ha sido cancelado.

No obstante, lo anterior, dicho argumento resulta ser intrascendente en el presente asunto, ya que el *PT* no aportó la documentación que acredite la afiliación libre, individual, voluntaria, personal y pacífica de tal sujeto, en los términos establecidos en su normatividad interna.

Es decir, el registro de Domitilo López De la Cruz por parte del *PT* en su padrón de militantes no está controvertido, ni tampoco la circunstancia de que, a la fecha, siga manteniendo o no su registro en dicho instituto político, sino lo que, en el caso se debe determinar si esa afiliación se llevó a cabo o no de forma libre, individual, voluntaria, personal y pacífica.

En mérito de lo anterior, existe evidencia que hace suponer que la afiliación a la que se refiere en este apartado, fue producto de una acción ilegal por parte del *PT*.

Por lo anterior, este órgano colegiado considera pertinente declarar **FUNDADO** el presente procedimiento, pues se concluye que el *PT* infringió las disposiciones electorales tendentes a demostrar la libre afiliación de los **nueve (9) ciudadanos** antes referidos, quienes aparecieron como afiliados a dicho instituto político, por no demostrar el acto volitivo de éstos para permanecer agremiados a ese partido.

En efecto, como se demostró anteriormente, los denunciantes que aparecieron afiliados al *PT*, manifestaron que en momento alguno otorgaron su consentimiento para ello, siendo que dicho instituto político no demostró lo contrario, por lo que se actualiza la violación al derecho fundamental de libre afiliación garantizado desde la Constitución y la ley, según se expuso.

Al respecto, es importante destacar, en lo que interesa, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada el seis de junio de dos mil dieciocho, al resolver el medio de impugnación con clave SUP-RAP 141/2018:¹³¹

“...si los ciudadanos referidos alegaron que no dieron su consentimiento para pertenecer al partido político recurrente, implícitamente sostienen que no existe la constancia de afiliación atinente; por tanto, los ciudadanos no estaban obligados a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba tampoco son objeto de demostración los hechos negativos, salvo que envuelvan una afirmación.¹³²”

Esto es, en el tema que nos ocupa, conforme a lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada en el medio de impugnación SUP-RAP 141/2018, la carga probatoria corresponde a los partidos políticos, en el caso al *PT*, ente político que *se encuentra obligado a demostrar que la solicitud de ingreso al partido fue voluntaria, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad o, en su caso, también tenía la posibilidad de probar sus afirmaciones a través de otros medios de prueba como lo sería documentales que justificaran la participación voluntaria de dichas personas en la vida interna del partido y con carácter de militante, como lo serían, por ejemplo, documentales que evidenciaran el pago de cuotas partidistas, la participación en*

¹³¹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_judicial/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0141-2018.pdf

¹³² De conformidad con los numerales 461 de la *Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales*, en relación el diverso 441 de ese ordenamiento y 15, segundo párrafo, de la *Ley de Medios*

*actos del partido, la intervención en asambleas internas, el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras,*¹³³ circunstancia que, en el particular no aconteció.

Así pues, el *PT*, en los **nueve (9)** casos analizados, no demostró que las afiliaciones se realizaron a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que dichos ciudadanos hayan dado su consentimiento para ser afiliados, ni mucho menos que hayan permitido o entregado datos personales para ese fin, los cuales se estiman necesarios para procesar las afiliaciones, dado que estos elementos se constituyen como insumos obligados para, en su momento, llevar a cabo una afiliación, de ahí que esto sea necesario e inescindible.

Con base en ello, ante la negativa de los denunciantes de haberse afiliado al *PT*, correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de pruebas idóneas, que la afiliación se llevó a cabo a través de los mecanismos legales para ello, en donde constara fehacientemente la libre voluntad de los hoy promoventes, lo que no hizo, siendo que el solo hecho de aparecer en su registro electrónico es insuficiente para acreditar el ejercicio libre, personal y voluntario del derecho de afiliación a dicho instituto político.

Es decir, no basta con que los quejosos aparezcan como afiliados al *PT* en sus registros electrónicos, sino que dicho instituto político debió demostrar, con documentación soporte o pruebas idóneas, que dichas afiliaciones se realizaron de forma libre o voluntaria, o bien, que la aparición del nombre y datos de los quejosos en su padrón de militantes, fue consecuencia de un error involuntario o de alguna circunstancia diversa, pero no lo hizo.

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación al *PT* implica, además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que

¹³³ Criterio sostenido en la sentencia dictada en el medio de impugnación SUP-RAP 141/2018.

podiera haber servido de base o justificación al partido político para afiliar a los ahora quejosos.

Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales, tiene íntima vinculación con la afiliación indebida de los **nueve (9)** quejosos sobre los que se declara fundado el presente procedimiento, lo cual ya quedó debidamente acreditado y, como consecuencia de ello, merece la imposición de las sanciones que se determinarán en el apartado correspondiente.

Cabe referir que a similar conclusión arribó este Consejo General en la resolución INE/CG120/2018, de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/ALC/CG/39/2017, así como en la resolución INE/CG448/2018, de once de mayo de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2017, las cuales fueron confirmadas por el *Tribunal Electoral* al dictar sentencia el veinticinco de abril y once de mayo de dos mil dieciocho, en los medios de impugnación con clave SUP-RAP-047/2018¹³⁴ y SUP-RAP-137/2018,¹³⁵ respectivamente, derivado de una falta de la misma naturaleza a la que aquí se estudia, en donde se determinó que el uso de datos personales poseía un carácter intrínseco o elemento esencial para la configuración de una afiliación indebida.

Apartado C. Ciudadanos que fueron afiliados debidamente al PT

Respecto a los **dos (2) ciudadanos** que se citan a continuación, el presente procedimiento sancionador ordinario es **INFUNDADO** en contra del *PT*, conforme a los argumentos que se exponen a continuación:

CIUDADANOS AFILIADOS DEBIDAMENTE	
6	Ma. de Lourdes De La Cruz Sánchez

CIUDADANOS AFILIADOS DEBIDAMENTE	
8	Juan Arias Presenda

¹³⁴ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0047-2018.pdf

¹³⁵ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0137-2018.pdf

Como se señaló, debe tenerse en cuenta que el *PT* aportó copia certificada de la cédula de afiliación de los ciudadanos, a fin de demostrar su libre voluntad para afiliarse a ese partido. Como consecuencia de lo anterior, mediante proveído dictado por la Unidad Técnica, en su calidad de autoridad instructora, se ordenó dar vista a las partes para que formularan los alegatos correspondientes; asimismo, se instruyó correr traslado a cada una con las constancias correspondientes, a fin de que, en ejercicio del derecho de contradicción que les asiste, se pronunciaran sobre las mismas.

Sin embargo, **tales ciudadanos no se opusieron a las constancias exhibidas por el partido** para tal efecto, específicamente a la copia certificada de su **formato de afiliación**, signados, respectivamente, por los ciudadanos quejosos; razón por la cual tales documentales debe tenerse por no objetadas o controvertidas por los denunciantes en cita, sobre las cuales, cada uno de ellos, no se pronunciaron.

En el caso de **Ma. de Lourdes De La Cruz Sánchez**, la ciudadana en su escrito de denuncia¹³⁶ manifestó, esencialmente: *Solo me ofrecieron tomar una foto para tener credencial del partido*, esto es, reconoce que, en algún momento, tuvo la intención de obtener una credencial que la acreditara como ciudadana afín al instituto político denunciado.

Además, el partido político denunciado presentó copia certificada de formato de afiliación sin que tal documental fuera objetada o controvertida por la quejosa, ya que de la vista que le fue formulada con las constancias atinentes, no se pronunció respecto a tal documento, limitándose a manifestar en vía de alegatos,¹³⁷ lo siguiente: *Comparezco para ofrecer alegatos, los cuales son los siguientes que solicite la baja del partido al cual desconocía fuera ser afiliada por lo que quiero hacerle saber que esta situación afecta en mi empleo a desarrollar, por lo que requiero se atienda a dicha situación.*

De allí que, se considera que en el caso de **Ma. de Lourdes De La Cruz Sánchez** no existe una afiliación indebida por parte del *PT*.

¹³⁶ Visible a página 51 del expediente.

¹³⁷ Visible a página 501 del expediente.

En efecto, la ciudadana a que se hace referencia, en su escrito inicial, denunció una presunta afiliación indebida al *PT*; sin embargo, a través de su escrito de alegatos en el presente procedimiento, reconoció la militancia a dicho instituto político, en los términos ya apuntados, solicitando a su vez, la desafiliación al mencionado instituto político.

Por esta razón, esta autoridad concluye que, en el caso, no se actualiza la infracción que denunció primigeniamente, consistente en la afiliación indebida al *PT*, además de que tampoco se podría actualizar una infracción por parte del partido político denunciado, derivado de la omisión de cancelar su registro como militante, al no haber sido denunciado tal hecho y, porque, además, el registro de la misma, a la fecha ha sido cancelado.

Finalmente, en el caso del ciudadano **Juan Arias Presenda**, el *PT* remitió copia certificada del formato de afiliación, sin que tal documental fuera objetada o controvertida por el quejoso, al no haber dado contestación a la vista de alegatos.

Es por ello que, al no acreditarse una acción ilegal por parte del *PT*, por lo que hace a los **dos (2)** ciudadanos referidos en el presente apartado, el procedimiento sancionador ordinario es **INFUNDADO**.

CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de las faltas denunciadas, así como la responsabilidad por parte del *PT*, en los casos detallados en el considerando que antecede, procede ahora determinar la sanción correspondiente, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 355, párrafo 5 del *COFIPE*, cuyo contenido se reproduce en el diverso 458, párrafo 5, de la *LGIFE*, relativo a la gravedad de la responsabilidad en que se incurra; el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; y, en su caso, la reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.

En relación con ello, el *Tribunal Electoral* ha sostenido que para individualizar la sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción electoral.

1. Calificación de la falta

A. Tipo de infracción

Partido	Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
PT	La infracción se cometió por acción y omisión del partido político denunciado, que transgrede disposiciones de la <i>Constitución</i> , del <i>COFIPE</i> , en el momento de su comisión, así como de la <i>LGIPE</i> y la <i>LGPP</i> .	La conducta fue la afiliación indebida de nueve (9) ciudadanos, y la omisión de dar de baja del padrón de afiliados de militantes a dos (2) ciudadanos por parte del PT	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la <i>Constitución</i> ; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del <i>COFIPE</i> ; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la <i>LGIPE</i> ; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la <i>LGPP</i> .

B. Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o prohibidas.

En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el caso concreto, se acreditó que al **PT** registro o incluyó indebidamente en su padrón de afiliados a **Graciela Ortiz Pablo, Asthur Azael Vela Sulu, Gregoria Anguamea Arenas, Hugo Fernando Mafun Gómez, Elia Molina Vargas, Domitilo López de la Cruz, Mario Alberto Carrillo López, Huitzilihuitl Acosta Ortega, Judith Soto Villarreal**, sin demostrar que para incorporarlos medió la voluntad de éstos de inscribirse como militantes de dicho instituto político; asimismo, porque dicho partido incluyó o mantuvo indebidamente en su padrón de afiliados a **Agapita Borges Cruz y Martha Araceli Coronado Coronado**, no obstante que tales ciudadanos manifestaron su voluntad de no permanecer como militantes de dicho instituto político, violentando con ello lo establecido en los artículos 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; y 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e) del **COFIPE**; 443, párrafo 1, incisos a) y n); de la **LGIPE**, y 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la **LGPP**.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de los ciudadanos mexicanos, de optar libremente por ser o no militante de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, efectivamente consintieron libremente en ser sus agremiados.

Por otra parte, como se analizó, para la afiliación indebida acreditada en el expediente que se resuelve se usaron los datos personales de los promoventes sin que éstos hubiesen otorgado su consentimiento para ello, lo cual, constituye un elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida.

En efecto, si bien es cierto, a partir de las constancias que obran en autos no está demostrado que los datos personales hubieran sido utilizados con un propósito diverso a la afiliación indebida en sí misma, o bien su difusión frente a terceros, lo es también que dicha información fue necesaria para materializar la incorporación de los datos de los actores al padrón de militantes del partido político denunciado.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo argumentado en la sentencia de siete de junio de dos mil dieciocho dictada por la Sala Superior al resolver el recurso de apelación

SUP-RAP-141/2018,¹³⁸ en la que se estableció, en lo que interesa sobre el tema, lo siguiente:

“...los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de un ciudadano pertenecer a un partido político, no puede alegar que existe uso indebido de sus datos personales porque se consideran públicos.

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban pertenecer.”

De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción correspondiente al **PT**.

C. Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que el **PT** transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la normativa interna del instituto partido político, y que, tal infracción se cometió en detrimento de los derechos de más de un ciudadano, esta situación no conlleva estar en presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de afiliación y desafiliación al instituto político denunciado, quien incluyó o mantuvo en su padrón de militantes a los hoy quejosos, sin demostrar el consentimiento previo para ello.

D. Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

¹³⁸ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0141-2018.pdf

a) Modo. En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles al **PT**, consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la *Constitución*; así como 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e) del COFIPE disposiciones que se encuentran replicadas en los diversos dispositivos 443, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la LGPP, por lo siguiente:

- Al incluir en su padrón de afiliados a **Graciela Ortiz Pablo, Asthur Azael Vela Sulu, Gregoria Anguamea Arenas, Hugo Fernando Mafun Gómez, Elia Molina Vargas, Domitilo López de la Cruz, Mario Alberto Carrillo López, Huitzilihuitl Acosta Ortega, Judith Soto Villarreal**, sin tener la documentación soporte que acredite fehacientemente la voluntad de éstos de pertenecer a las filas de ese instituto político.
- En el caso de **Agapita Borges Cruz y Martha Araceli Coronado Coronado**, al mantener su registro de militantes en contra su voluntad, tal y como se advirtió a lo largo de la presente Resolución de forma pormenorizada.

b) Tiempo. En el caso concreto, como se razonó en el considerando que antecede, las infracciones cometidas por el **PT**, se realizaron conforme a lo siguiente:

▪ **Afiliación indebida**

Ciudadano	Fecha de Afiliación	Fecha de Cancelación
Graciela Ortiz Pablo	12/11/2013	-----
Asthur Azael Vela Sulu	12/01/2015	-----
Gregoria Anguamea Arenas	17/01/2014	-----
Hugo Fernando Mafun Gómez	28/10/2010	04/12/2017
Elia Molina Vargas	17/11/2011	-----
Domitilo López de la Cruz	12/02/2009	18/01/2018
Mario Alberto Carrillo López	14/05/2014	-----

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GOP/JD03/BC/37/2018

Ciudadano	Fecha de Afiliación	Fecha de Cancelación
Huitzilihuitl Acosta Ortega	22/12/2014	-----
Judith Soto Villarreal	31/12/2014	-----

▪ **Omisión de cancelar registro de afiliación**

Respecto a **Agapita Borges Cruz** y **Martha Araceli Coronado Coronado**, ciudadanas que manifestaron su voluntad de no pertenecer al *PT*, y de las cuales dicho partido no las dio de baja de su padrón de militantes, se tendrá como temporalidad de la realización de la conducta, el día de la presentación de la referida solicitud de baja, renuncia y/o desconocimiento de afiliación, ya que se considera que fue en ese momento en que el denunciado, a pesar de haber sido enterado de la voluntad de las ciudadanas de ya no pertenecer a sus filas, no realizó los trámites correspondientes a efecto de eliminarlos de su padrón de militantes, de manera pronta.

Quejosa	Fecha de desconocimiento de afiliación y/o renuncia	Estatus
Martha Araceli Coronado Coronado	2014 ¹³⁹	Registro cancelado el 11 de enero de 2018
Agapita Borges Cruz	26 de enero de 2015 ¹⁴⁰	Vigente al 21 de febrero de 2018 ¹⁴¹

c) **Lugar.** Con base en las razones plasmadas en los escritos de denuncias, se deduce que las faltas atribuidas al *PT* se cometieron de la siguiente manera:

No.	Quejoso	Entidad
1	Graciela Ortiz Pablo	Baja California
3	Gregoria Anguamea Arenas	

No.	Quejoso	Entidad
4	Hugo Fernando Mafun Gómez	Estado de México

¹³⁹ Visible a página 57 del expediente.

¹⁴⁰ Visible a página 97 del expediente.

¹⁴¹ Conforme a la información proporcionada por al *DEPPP*, a través de correo electrónico enviado el 21 de febrero de 2018. Visible a páginas 115-116 (ambos lados) del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GOP/JD03/BC/37/2018

No.	Quejoso	Entidad
10	Mario Alberto Carrillo López	Durango
11	Huitzilihuitl Acosta Ortega	
12	Judith Soto Villarreal	

No.	Quejoso	Entidad
13	Agapita Borges Cruz	Hidalgo

No.	Quejoso	Entidad
5	Elia Molina Vargas	Morelos

No.	Quejoso	Entidad
7	Martha Araceli Coronado Coronado	San Luis Potosí

No.	Quejoso	Entidad
9	Domitilo López de la Cruz	Tabasco

No.	Quejoso	Entidad
2	Asthur Azael Vela Sulu	Quintana Roo

E. Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Se considera que en el caso existe una conducta **dolosa** por parte del *PT*, en violación a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e) del COFIPE, disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la LGPP.

La falta se califica como **dolosa**, por lo siguiente:

- El *PT* es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus constitucional de **entidad de interés público**, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la *Constitución*; 22 y 25

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

- El *PT* está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 38, párrafo 1, inciso a), del *COFIPE*, disposición que se replica en el diverso 25, párrafo 1, inciso a) de la *LGPP*.
- El de libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
- La desafiliación a un partido político, es una modalidad del derecho fundamental de libre afiliación, por el cual un ciudadano elige libremente, en cualquier momento y sin restricción alguna de terceros, ya no pertenecer al mismo.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.
- Todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación o desafiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.
- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre

afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e), del COFIPE.

- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria.**
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La violación a la libertad de afiliación, es de orden constitucional y legal que **requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano que aun cuando haya manifestado su voluntad de ser dado de baja de un padrón de afiliados, se conserve su registro injustificadamente.**

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta se considera dolosa, porque:

- 1) Los ciudadanos que se indican a continuación, aducen que no solicitaron en momento alguno su registro o incorporación como militantes al *PT*.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GOP/JD03/BC/37/2018

No.	Denunciantes
1	Graciela Ortiz Pablo
2	Asthur Azael Vela Sulu
3	Gregoria Anguamea Arenas
4	Hugo Fernando Mafun Gómez
5	Elia Molina Vargas
9	Domitilo López de la Cruz
10	Mario Alberto Carrillo López
11	Huitzilihuitl Acosta Ortega
12	Judith Soto Villarreal

- 2) **Agapita Borges Cruz y Martha Araceli Coronado Coronado**, manifiestan su deseo de dejar de pertenecer a las filas de militantes del *PT*.
- 3) Quedó acreditado que los quejosos aparecieron en el padrón de militantes del *PT*.
- 4) El partido político denunciado no demostró que la afiliación de Graciela Ortiz Pablo, Asthur Azael Vela Sulu, Gregoria Anguamea Arenas, Hugo Fernando Mafun Gómez, Elia Molina Vargas, Domitilo López de la Cruz, Mario Alberto Carrillo López, Huitzilihuitl Acosta Ortega y Judith Soto Villarreal, se hubiera realizado a través de los mecanismos legales y partidarios conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y voluntaria de los denunciantes.
- 5) El partido denunciado no demostró ni probó que la **afiliación** de Graciela Ortiz Pablo, Asthur Azael Vela Sulu, Gregoria Anguamea Arenas, Hugo Fernando Mafun Gómez, Elia Molina Vargas, Domitilo López de la Cruz, Mario Alberto Carrillo López, Huitzilihuitl Acosta Ortega y Judith Soto Villarreal y la **desafiliación**, en el caso, de Agapita Borges Cruz y Martha Araceli Coronado Coronado, fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun indiciaria, para estimar que la afiliación de los quejosos fue debida y apegada a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.

F. Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el **PT**, se cometió al afiliar indebidamente a Graciela Ortiz Pablo, Asthur Azael Vela Sulu, Gregoria Anguamea Arenas, Hugo Fernando Mafun Gómez, Elia Molina Vargas, Domitilo López de la Cruz, Mario Alberto Carrillo López, Huitzilihuitl Acosta Ortega y Judith Soto Villarreal y, en el caso, de Agapita Borges Cruz y Martha Araceli Coronado Coronado, de permanecer inscritos en sus padrones de militantes como de haber proporcionado sus datos personales para ese fin.

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en garantizar el derecho de libre afiliación y la protección de los datos personales de los ciudadanos mexicanos, mediante la conservación de los documentos atinentes que permitan demostrar el acto de voluntad de los ciudadanos quejosos de militar en los distintos partidos políticos ni para el uso de sus datos personales.

2. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A. Reincidencia

Por cuanto a la **reincidencia** en que pudieron haber incurrido los partidos materia de esta Resolución, este organismo electoral autónomo considera que **no se actualiza**.

De conformidad con el artículo 355 párrafo 6 del *COFIPE*, cuyo contenido reproduce el diverso 458, párrafo 6 de la *LGIPE*, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el mencionado *Código*, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, la Sala Superior ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);
2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
3. Que en ejercicios anteriores el infractor **haya sido sancionado por esa infracción mediante Resolución o sentencia firme.**

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el *Tribunal Electoral*, a través de la Tesis de Jurisprudencia **41/2010**, de rubro **REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.**¹⁴²

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con anterioridad.

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta.

En este sentido, debe precisarse que, en el presente asunto, no puede considerarse actualizado dicho supuesto por cuanto hace al **PT**, pues en los archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya sancionado a ese instituto político por faltas como la que se sanciona por esta vía, que se hayan dictado con anterioridad a los hechos materia de las presentes denuncias.

¹⁴² Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010>

B. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de Graciela Ortiz Pablo, Asthur Azael Vela Sulu, Gregoria Anguamea Arenas, Hugo Fernando Mafun Gómez, Elia Molina Vargas, Domitilo López de la Cruz, Mario Alberto Carrillo López, Huitzilihuitl Acosta Ortega y Judith Soto Villarreal y, la desafiliación, en el caso, de Agapita Borges Cruz y Martha Araceli Coronado Coronado, a los partidos políticos.
- Se comprobó que el *PT* afilió a Graciela Ortiz Pablo, Asthur Azael Vela Sulu, Gregoria Anguamea Arenas, Hugo Fernando Mafun Gómez, Elia Molina Vargas, Domitilo López de la Cruz, Mario Alberto Carrillo López, Huitzilihuitl Acosta Ortega y Judith Soto Villarreal, sin demostrar contar con la documentación soporte correspondiente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GOP/JD03/BC/37/2018

- Se comprobó que el *PT* no desafilió, Agapita Borges Cruz y Martha Araceli Coronado Coronado, esta última, por lo menos al once de enero de dos mil dieciocho, sin demostrar que medió la voluntad de sus agremiados de pertenecer nuevamente o estar inscritos a dicho instituto político.
- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, incluso en su modalidad de desafiliación, de optar por ser o no militante de algún partido político, y la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.
- Para materializar la violación a la libertad de afiliación de los denunciantes, se utilizaron indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para registrarlos y/o mantenerlos de forma indebida dentro del padrón de afiliados del partido denunciado.
- No existió un beneficio por parte del partido denunciado, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral.
- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso Electoral.
- No existe reincidencia por parte del *PT*.

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente **calificar la falta** en que incurrió el *PT* como de **gravedad**

ordinaria, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el partido denunciado dolosamente infringió el derecho de libre afiliación de los hoy quejosos, lo que constituye una violación al derecho fundamental de los ciudadanos reconocidos en la *Constitución*.

Al respecto, es importante precisar que para efectos de determinar el monto de la sanción a imponer se debe diferenciar, **como en el caso acontece, si se está ante una afiliación indebida o una violación al derecho de libre afiliación en su vertiente de no permitirle al quejoso ser desafiliado.**

Sirve de apoyo a lo anterior, lo resuelto por la Sala Superior al dictar sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-141/2018, en la que determinó, esencialmente, lo siguiente:

“Finalmente, para efectos de la sanción a imponer, consideró oportuno diferenciar entre aquellos ciudadanos de los que se utilizaron indebidamente sus datos personales para afiliarlos sin su consentimiento al partido denunciado (once ciudadanos) y aquélla que denunció la presunta indebida afiliación en su vertiente de falta de atención al derecho de desafiliación, puesto que, si bien en ambos casos estamos ante la presencia de una falta grave ordinaria, lo cierto es que en el primero de los supuestos hubieron hechos afirmativos tendentes a menoscabar el derecho de libre afiliación, utilizando datos personales de los afectados y en el segundo, se trata de una omisión, lo cual conlleva que la sanción imponer en cada supuesto sea diferenciada.

Por tal motivo, en el caso concreto, se estima que la motivación expuesta por el Instituto Nacional Electoral fue suficiente para justificar la individualización de la sanción.”

C. Sanción a imponer

Ahora bien, la mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción.

Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y

lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor entidad.¹⁴³

El artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIPE*, dispone el catálogo de sanciones a imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México; reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita; y en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la *Constitución* y de la *LGIPE*, con la cancelación de su registro como partido político.

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción (especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción acreditada), así como la conducta realizada por el *PT* se determina que debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida.

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la *LGIPE*, confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que, a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realicen una falta similar.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no

¹⁴³ Véase la tesis XXVIII/2003 del *Tribunal Electoral*, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.

resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que ni el *COFIPE* ni la *LGIPE*, determinan pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo establecen las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

Asimismo, es importante tomar en cuenta que el número de ciudadanos en los que se actualizó la violación al derecho a la libre afiliación tanto en su vertiente de afiliación indebida de una ciudadana como en su vertiente de no permitir a dos ciudadanos ser desafiliados, por haber renunciado a su militancia, y el partido denunciado fue omiso en darlos de baja.

Con base en lo anterior, este Consejo General estima que, derivado de las circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida al **PT**, justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido se replica con el diverso 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGIPE*, consistente en una **MULTA unitaria por cuanto hace a cada uno de los tres ciudadanos sobre quienes se cometió la falta acreditada**, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto.

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar

un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la sanción a imponer.

▪ **Afiliación indebida**

En este orden de ideas, es pertinente hacer notar, que ha sido criterio de esta autoridad, en la resolución INE/CG120/2018, de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/ALC/CG/39/2017, así como en la resolución INE/CG448/2018, de once de mayo de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2017, las cuales fueron confirmadas por el *Tribunal Electoral* al dictar sentencia el veinticinco de abril y once de mayo de dos mil dieciocho, en los medios de impugnación con clave

SUP-RAP-047/2018¹⁴⁴ y SUP-RAP-137/2018,¹⁴⁵ respectivamente, en los que se sancionó por una afiliación indebida de un ciudadano, en cada caso, con una multa equivalente a **642 (seiscientos cuarenta y dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México**, al momento de la comisión de la conducta, sanción que se estima debe tomarse como base para el presente asunto, si se considera que en dichos asuntos se demostró la comisión de una infracción similar a la que acontece en los casos que aquí se resuelven.

▪ **Violación al derecho a la libre afiliación en su vertiente de no permitir a los ciudadanos ser desafiliados**

Cabe referir que ha sido criterio de este Consejo General en la resolución INE/CG536/2018, de veinte de junio de dos mil dieciocho, al resolver el

¹⁴⁴ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0047-2018.pdf

¹⁴⁵ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0137-2018.pdf

procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/GPM/JL/OAX/28/2018, derivado de una falta de la misma naturaleza a la que aquí se estudia, esto es por violación al derecho a la libre afiliación en su vertiente de no permitir a los ciudadanos ser desafiliados, sancionar con una multa equivalente a **321 (trescientos veintiún) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México y/o en su caso, Unidades de Medida y Actualización al PT, por UN ciudadano que no fue desafiliado** (dependiendo del año de la presentación de la renuncia ante el partido).

En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta causa, y que en la especie se encuentra implicado una ciudadana, a quien el **PT afilió indebidamente** y respecto a dos ciudadanos **violó su derecho a la libre afiliación en su vertiente de no permitirles ser desafiliados, ya que los mantiene en su padrón de militantes sin su consentimiento como sus afiliados, utilizando para ello sus datos personales**, por tanto, es claro que la individualización de la sanción que se aplique, debe resultar proporcional al número de ciudadanos en cuyo perjuicio se cometió la falta, sin perder de vista las condiciones socioeconómicas del instituto político.

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad debe determinar su monto o cuantía, **tomando en cuenta** las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que corresponda.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las

circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión que tiene sustento en la Tesis relevante **XXVIII/2003**,¹⁴⁶ emitida por el *Tribunal Electoral*, misma que a letra establece:

“SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.- En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.”

Ahora bien, a juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con base en lo dispuesto en la fracción II del numeral citado, lo procedente es imponer sendas **multas**, conforme a lo siguiente:

- **Afiliación indebida**

642 (seiscientos cuarenta y dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento de la comisión de la conducta.

- **Violación al derecho a la libre afiliación en su vertiente de no permitir a los ciudadanos ser desafiliados**

321 (trescientos veintiún) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México.

¹⁴⁶ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GOP/JD03/BC/37/2018

Al respecto, es un hecho notorio que se invoca en términos de lo establecido en el artículo 358 del *COFIPE*, cuyo contenido se replica en el diverso 461 de la *LGIFE*, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fija anualmente los montos respectivos, mismos que al ser relacionados con las fechas de afiliación u omisión de desafiliación, para obtener la sanción que corresponde por cuanto a cada uno de los ciudadanos, arrojan lo siguiente:

PT		
Total de quejosos	Salario mínimo	Sanción a imponer
Afiliación 2009		
1	\$54.80	\$35,181.60
Afiliación 2010		
1	\$57.46	\$36,889.32
Afiliación 2011		
1	\$59.82	\$38,404.44
Afiliación 2013		
1	\$64.76	\$41,575.92
Afiliación 2014		
4	\$67.29	\$172,800.72
Omisión de desafiliación 2014		
1	\$67.29	\$21,600.09
Afiliación 2015		
1	\$70.10	\$45,004.20
Omisión de desafiliación 2015		
1	\$70.10	\$22,502.10
TOTAL		\$413,958.39
[Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].		

Sanción por ciudadano:

No	Ciudadano	Fecha de Afiliación u omisión de desafiliación	Salario mínimo	Sanción a imponer
1	Graciela Ortiz Pablo	12/11/2013	\$64.76	\$41,575.89
2	Asthur Azael Vela Sulu	12/01/2015	\$70.10	\$45,003.81
3	Gregoria Anguamea Arenas	17/01/2014	\$67.29	\$43,199.98
4	Hugo Fernando Mafun Gómez	28/10/2010	\$57.46	\$36,889.00
5	Elia Molina Vargas	17/11/2011	\$59.82	\$38,404.28
7	Martha Araceli Coronado Coronado	Omisión 2014	\$67.29	\$21,599.99
9	Domitilo López de la Cruz	12/02/2009	\$54.80	\$35,181.09

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GOP/JD03/BC/37/2018

No	Ciudadano	Fecha de Afiliación u omisión de desafiliación	Salario mínimo	Sanción a imponer
10	Mario Alberto Carrillo López	14/05/2014	\$67.29	\$43,199.98
11	Huitzilihuitl Acosta Ortega	22/12/2014	\$67.29	\$43,199.98
12	Judith Soto Villarreal	31/12/2014	\$67.29	\$43,199.98
13	Agapita Borges Cruz	Omisión 2015	\$70.10	\$22,501.90
TOTAL				\$413,955.88 <small>[Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].</small>

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, pues sin ser gravosa, sí puede inhibir al **PT**, para que en el futuro vigile el cumplimiento de las normas de la materia.

Ahora bien, es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la *Constitución* —efectuada por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones.

En esas condiciones, lo procedente es transformar la sanción que se considera idónea, expresada en salarios mínimos, a Unidades de Medida y Actualización, para lo cual es necesario dividir el monto inicial (seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México multiplicado por el salario mínimo vigente en cada año señalado en el cuadro), entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, misma que equivale, para el ejercicio fiscal en curso, a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M. N.).

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 10/2018,¹⁴⁷ del *Tribunal Electoral*, de rubro y contenido siguiente:

“MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA

¹⁴⁷ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=Jurisprudencia,10/2018>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GOP/JD03/BC/37/2018

INFRACCIÓN.- De la interpretación sistemática de los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transitorios segundo y tercero del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como 44, párrafo primero, inciso aa), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando en consideración el principio de legalidad que rige en los procedimientos sancionadores, se advierte que el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del ilícito.”

De esta manera, al aplicar la fórmula mencionada, se obtiene lo siguiente:

Salario mínimo vigente	El SMGV se multiplica por 642 o 321 días de SMGV en el año	La cifra obtenida de la multiplicación anterior, se divide entre la Unidad de Medida y Actualización vigente de \$80.60	La cifra obtenida de la operación anterior se multiplica por el número de ciudadanos	Sanción a imponer en Unidad de Medida y Actualización
Afiliación en 2009				
\$54.80	642	436.49	1	436.49
Afiliación en 2010				
\$57.46	642	457.68	1	457.68
Afiliación en 2011				
\$59.82	642	476.48	1	476.48
Afiliación en 2013				
\$64.76	642	515.83	1	515.83
Afiliación en 2014				
\$67.29	642	535.98	4	2,143.92
Desafiliación 2014				
\$67.29	321	267.99	1	267.99
Afiliación en 2015				
\$70.10	642	558.36	1	558.36
Desafiliación 2015				
\$70.10	321	279.18	1	279.18

La suma de los montos antes referidos, corresponde a 5,135.93 (cinco mil ciento treinta y cinco punto noventa y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$413,955.95 (cuatrocientos trece mil novecientos cincuenta y cinco pesos 95/100 M.N.) [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].

Debe precisarse que se considera que la multa impuesta al **PT** constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el

futuro, ya que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, se concluye que la misma resulta eficaz y proporcional.

D. El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la infracción

Se estima que la infracción cometida por parte del **PT**, aun cuando causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de la infracción.

E. Las condiciones socioeconómicas del infractor

Sobre este punto, es preciso señalar que conforme al Acuerdo INE/CG339/2017, emitido por este *Consejo General* el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se estableció que, entre otros, el **PT** recibiría mensualmente en el presente ejercicio, por concepto de financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes, la siguiente cantidad:

SUJETO	Monto del financiamiento público para el sostenimiento de Actividades Ordinarias del mes de septiembre 2018
PT	\$19'737,029.00

Ahora bien, según fue informado por la DEPPP, a través del oficio **INE/DEPPP/DE/DPPF/5693/2018**, el monto de la ministración mensual correspondiente a septiembre de dos mil dieciocho, debía ser ajustado en función de las sanciones administrativas pendientes de cubrir por dicho instituto político nacional, por lo cual la cifra total a recibir sería la siguiente:

SUJETO	IMPORTE DE LA MINISTRACIÓN DE SEPTIEMBRE DE 2018	IMPORTE TOTAL DE LAS SANCIONES SEPTIEMBRE 2018	IMPORTE DE REINTEGRO DE FINANCIAMIENTO LOCAL PARA GASTOS DE CAMPAÑA	IMPORTE NETO DE LA MINISTRACIÓN
PT	\$19,737.029.00	\$9,868,514.00	\$0.00	\$9,868,515.00

D. Impacto en las actividades del sujeto infractor

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta al *PT*, no es de carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida, respecto al monto del financiamiento que recibirá por concepto de actividades ordinarias permanentes en el mes de septiembre del año en curso, los siguientes porcentajes:

Partido político	Año	Monto de la sanción por ciudadano.¹⁴⁸	Ciudadanos indebidamente afiliados	% de la ministración mensual por ciudadano
<i>PT</i>	2009	\$35,181.09	1	0.35%
	2010	\$36,889.00	1	0.37%
	2011	\$38,404.28	1	0.38%
	2013	\$41,575.89	1	0.42%
	2014	\$43,199.98	4	0.43%
	Omisión 2014	\$21,599.99	1	0.21%
	2015	\$45,003.81	1	0.45%
	Omisión 2015	\$22,501.90	1	0.22%

Por consiguiente, la sanción impuesta al *PT* no es de carácter gravoso, si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual correspondiente al mes de septiembre de este año.

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción cometida por el *PT* (especialmente los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con el financiamiento que recibe del *INE* para el mes de septiembre de dos mil dieciocho, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político sancionado.

¹⁴⁸ Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el partido político de mérito —tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagar sin que ello afecte sus operaciones ordinarias, además de que las sanciones son proporcionales a las faltas cometidas y se estima que, sin resultar excesivas ni ruinosas, pueden generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la *Sala Superior* en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-250/2009,¹⁴⁹ es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

QUINTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE LOS QUEJOSOS COMO MILITANTES. En tal sentido, se tiene que la voluntad de los denunciantes es no pertenecer al *PT*, por lo que se debe vincular al partido político, para que, de ser el caso, en el supuesto que los quejosos continúen en su padrón de militantes, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentaron su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, los medios de prueba que amparen el cumplimiento.

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017,¹⁵⁰ de cinco de enero de dos mil diecisiete, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el *INE*, que lo vincule con un instituto político en particular.

Asimismo, se considera procedente es remitir copia certificada del escrito de queja con sus respectivos anexos al *PT*, para que en el ámbito de su competencia realice las investigaciones pertinentes e instaure los procedimientos que su normativa interna establezca y de ser el caso, finque las responsabilidades que correspondan, por la omisión de sus órganos internos, de desafiliar a **Martha Araceli Coronado Coronado y Agapita Borges Cruz**.

¹⁴⁹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://portal.te.gob.mx/coleccion/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm>

¹⁵⁰ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/JDC/2/SUP_2017_JDC_2-626321.pdf

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GOP/JD03/BC/37/2018

Sobre esto último, a similar conclusión arribó este Consejo General en la resolución INE/CG536/2018, de veinte de junio de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/GPM/JL/OAX/28/2018.

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la *Constitución*,¹⁵¹ se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previsto en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara **infundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra del **PT**, al **no** infringir las disposiciones electorales de libre afiliación de **dos ciudadanos**, en términos de lo establecido en el **Apartado C** del Considerando **TERCERO** de esta Resolución.

SEGUNDO. Se declara **fundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra del **PT**, al infringir las disposiciones electorales de libre afiliación de **once ciudadanos**, en términos de lo establecido en los Apartados **B** y **C** del Considerando **TERCERO** de esta Resolución.

TERCERO. En términos del Considerando CUARTO de la presente Resolución, se impone al **PT**, **una multa por la afiliación indebida u omisión de desafiliación** de los ciudadanos, conforme a los montos que se indican a continuación:

¹⁵¹ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª), Página: 2864, Rubro: “**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.**”

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GOP/JD03/BC/37/2018

No	Ciudadano	Importe de la multa
1	Graciela Ortiz Pablo	515.83 (quinientos quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$41,575.89 (cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 89/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2013]
2	Asthur Azael Vela Sulu	558.36 (quinientos cincuenta y ocho punto treinta y seis) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$45,003.81 (cuarenta y cinco mil tres pesos 81/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2015]
3	Gregoria Anguamea Arenas	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014]
4	Hugo Fernando Mafun Gómez	457.68 (cuatrocientos cincuenta y siete punto sesenta y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$36,889.00 (treinta y seis mil ochocientos ochenta y nueve pesos 00/100 M. N.) [Ciudadano afiliado en 2010]
5	Elia Molina Vargas	476.48 (cuatrocientos setenta y seis punto cuarenta y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$38,404.28 (treinta y ocho mil cuatrocientos cuatro pesos 28/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2011]
7	Martha Araceli Coronado Coronado	267.99 (doscientos sesenta y siete punto noventa y nueve) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$21,599.99 (Veintiún mil quinientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.) [Ciudadana que solicitó su desafiliación en 2014]
9	Domitilo López de la Cruz	436.49 (cuatrocientos treinta y seis punto cuarenta y nueve) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$35,181.09 (treinta y cinco mil ciento ochenta y un pesos 09/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2009]
10	Mario Alberto Carrillo López	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M. N.) [Ciudadano afiliado en 2014]
11	Huitzilihuitl Acosta Ortega	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M. N.) [Ciudadano afiliado en 2014]
12	Judith Soto Villarreal	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M. N.) [Ciudadano afiliado en 2014]
13	Agapita Borges Cruz	279.18 (doscientos setenta y nueve punto dieciocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$22,501.90 (Veintidós mil quinientos un pesos 90/100 M.N.) [Ciudadana que solicitó su desafiliación en 2015]

CUARTO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7 de la LGIPE, el monto de la multa impuesta al **PT**, será deducido de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/GOP/JD03/BC/37/2018

permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su Considerando CUARTO.

QUINTO. Se vincula al *PT* para que, de ser el caso, en el supuesto que los quejosos continúen en su padrón de militantes, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentaron su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, los medios de prueba que amparen el cumplimiento, así como para los efectos precisados en el Considerando QUINTO.

SEXTO. Se da vista al *PT* a efecto de que en el ámbito de su competencia realice las investigaciones pertinentes e instaure los procedimientos que su normativa interna establezca y de ser el caso, finque las responsabilidades que correspondan, por la omisión de sus órganos internos, de desafiliar a dos ciudadanas, de conformidad con lo dispuesto en el Considerando QUINTO.

SÉPTIMO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previsto en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Notifíquese personalmente a los ciudadanos que se enlistan a continuación:

No.	Denunciantes
1	Graciela Ortiz Pablo
2	Asthur Azael Vela Sulu
3	Gregoria Anguamea Arenas
4	Hugo Fernando Mafun Gómez
5	Elia Molina Vargas
6	Ma. de Lourdes De La Cruz Sánchez
7	Martha Araceli Coronado Coronado

No.	Denunciantes
8	Juan Arias Presenda
9	Domitilo López de la Cruz
10	Mario Alberto Carrillo López
11	Huitzilihuitl Acosta Ortega
12	Judith Soto Villarreal
13	Agapita Borges Cruz

Así como al *PT*, por conducto de su representante ante este Consejo General; y por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

INE/CG1247/2018

PROCEDIMIENTO	SANCIONADOR
ORDINARIO	
DENUNCIANTES: JORGE LUIS TRUJILLO LORENA Y OTROS	
DENUNCIADO:	PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018, INICIADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR JORGE LUIS TRUJILLO LORENA, JUAN CARLOS BRITO NOH, CELIA MEDINA MOYA, CYNTHIA ELENA ALMANZA VÁSQUEZ, JOSE ANTONIO HERNÁNDEZ GARCÍA, JOSE ELI SÁNCHEZ SILVA, JORGE OCTAVIO SOLÓRZANO BAYLON, MILTON ERNESTO CRUZ CARPIO, LEÓN FELIPE ARELLANO LUNA, RUBÉN JUAN DE DIOS GUERRERO CHÁVEZ, MARÍA GUADALUPE CRUZ MARTINEZ, EUSENIA CRISOSTOMO ÁNGELES, GERARDO TINAJERO ROMERO Y ESPERANZA HERNÁNDEZ CASILLAS, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA PRESUNTA AFILIACIÓN INDEBIDA, SIN QUE HUBIERE MEDIADO CONSENTIMIENTO ALGUNO, ASÍ COMO POR LUIS MIGUEL TZAKUM EK, QUIEN ALEGA HABER SOLICITADO SU DESAFILIACIÓN SIN QUE SE HUBIERA LLEVADO A CABO, TODO ELLO ATRIBUIBLE AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

G L O S A R I O

<i>COFIPE</i>	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>Consejo General</i>	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
<i>Constitución</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

<i>DEPPP</i>	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
<i>DERFE</i>	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
<i>IFE</i>	Instituto Federal Electoral
<i>INE</i>	Instituto Nacional Electoral
<i>LGIPE</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>LGPP</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>LGSMI</i>	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
<i>PRI</i>	Partido Revolucionario Institucional
<i>Reglamento de Quejas</i>	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>Tribunal Electoral</i>	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>Unidad Técnica-Autoridad</i>	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral

A N T E C E D E N T E S

I. DENUNCIA¹. En fechas diversas, se recibieron en la *UTCE* sendos escritos de queja signados por los ciudadanos que a continuación se enlistan, a través de los cuales hicieron del conocimiento de esta autoridad electoral, de manera individual, hechos que contravienen la normatividad electoral, consistentes en la violación del derecho de libertad de afiliación y la utilización de sus datos personales.

¹ Visible a fojas 1 a 504 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

No.	Nombre del quejoso	Fecha	Entidad Federativa
1.	Jorge Luis Trujillo Lorena ²	12/02/2018	CHIAPAS
2.	Juan Carlos Brito Noh ³	8/02/2018	YUCATAN
3.	Celia Medina Moya ⁴	09/02/2018	COLIMA
4.	Cynthia Elena Almanza Vásquez ⁵	02/02/2018	CHIHUAHUA
5.	José Antonio Hernández García ⁶	13/02/2018	ESTADO DE MEXICO
6.	José Eli Sánchez Silva ⁷	13/02/2018	MICHOACAN
7.	Jorge Octavio Solórzano Baylon ⁸	09/02/2018	CHIHUAHUA
8.	Milton Ernesto Cruz Carpio ⁹	08/02/2018	CHIAPAS
9.	León Felipe Arellano Luna ¹⁰	19/02/2018	PUEBLA
10.	Rubén Juan De Dios Guerrero Chávez ¹¹	19/02/2018	CHIHUAHUA
11.	María Guadalupe Cruz Martínez ¹²	20/02/2018	PUEBLA
12.	Eusenia Crisostomo Ángeles ¹³	13/02/2018	MICHOACAN
13.	Gerardo Tinajero Romero ¹⁴	22/02/2018	
14.	Esperanza Hernández Casillas ¹⁵	22/02/2018	
15.	Luis Miguel Tzakum Ek ¹⁶	26/02/2018	YUCATAN

II. REGISTRO DE LA DENUNCIA, DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.¹⁷ El trece de marzo de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo emitido por el Titular de la *Unidad*

² Visible a fojas 3 a 6 del expediente

³ Visible a fojas 8 a 11 del expediente

⁴ Visible a fojas 15 a 17 del expediente

⁵ Visible a fojas 20 a 23 del expediente

⁶ Visible a fojas 25 a 27 del expediente

⁷ Visible a fojas 29 a 31 del expediente

⁸ Visible a fojas 33 a 36 del expediente

⁹ Visible a fojas 37 a 39 del expediente

¹⁰ Visible a fojas 42 a 47 del expediente

¹¹ Visible a fojas 50 a 52 del expediente

¹² Visible a fojas 54 a 56 del expediente

¹³ Visible a fojas 58 a 60 del expediente

¹⁴ Visible a fojas 63 a 66 del expediente

¹⁵ Visible a fojas 67 a 70 del expediente

¹⁶ Visible a fojas 73 a 78 del expediente

¹⁷ Visible a fojas 79 a 89 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

Técnica, se ordenó formar el expediente respectivo e iniciar el trámite del presente procedimiento sancionador ordinario, el cual quedó registrado bajo la clave **UT/SCG/Q/JLTL/JD09/61/2018**, asimismo, se ordenó admitir a trámite el procedimiento y se reservó emplazar a las partes hasta en tanto se contara con los elementos necesarios para pronunciarse al respecto.

Con el propósito de constatar los hechos materia de inconformidad y allegarse de los elementos y constancias necesarios para la debida sustanciación del procedimiento indicado, en las fechas que se indican en el cuadro siguiente se acordaron las diligencias que se señalan.

Fecha del acuerdo	Diligencia o requerimiento	Dirigido a	No. de oficio y notificación	Fecha de respuesta
13/03/2018	<p>Se requirió lo siguiente:</p> <p>a) Si actualmente dentro de su Padrón de Afiliados se encuentran registrados los ciudadanos que a ese instituto político se refieren, y que para tal efecto se ordena anexar al presente requerimiento, en sobre cerrado, copia simple de la credencial para votar de los ciudadanos en cuestión.</p> <p>b) De ser afirmativa su respuesta, informe la fecha de alta en el referido padrón y remita el original o copia certificada de los expedientes en que obren las constancias de afiliación correspondientes.</p> <p>c) De ser negativa su respuesta, indique si anteriormente los ciudadanos fueron afiliados y la fecha de su baja en el referido padrón, y remita el original o copia certificada de los expedientes en que obren las constancias de los procedimientos de desafiliación correspondientes.</p>	<i>PRI</i>	INE-UT/2470/2018 13 / 03 / 2018	<p>16/03/2018¹⁸ Solicitud de prórroga</p> <p>05/04/2018¹⁹ Cumplimiento parcial</p>

¹⁸ Visible a foja 111 del expediente.

¹⁹ Visible a fojas 453 a 470 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

Fecha del acuerdo	Diligencia o requerimiento	Dirigido a	No. de oficio y notificación	Fecha de respuesta
13/03/2018	Para que, en breve término, informe si los ciudadanos que se enlistan, se encuentran registrados dentro del padrón de afiliados del partido político MORENA. En su caso, indique la fecha a partir de la cual se les dio de alta en el padrón de afiliados de los institutos políticos referidos con antelación y remita el original o copia certificada de los expedientes donde obren las constancias de afiliación respectivas.	DEPPP	INE-UT/2469/2018 13/03/2018	15/03/2018 ²⁰
08/05/2018	Se le requirió para que diera cumplimiento al proveído de 13/03/2018	PRI	INE-UT/6392/2018 08/05/2018	11/05/2018 ²¹

III. EMPLAZAMIENTO AL *PRP*²². El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, agotadas las diligencias de investigación preliminar, se emitió acuerdo en el que se ordenó emplazar al *PRI*, a través de su representante propietario ante el *Consejo General* de este Instituto, a efecto de que expresara lo que a su derecho conviniera, respecto a la conducta que se le imputaba y aportara las pruebas que considerara pertinentes.

La citada diligencia se tramitó en los siguientes términos:

EMPLAZAMIENTO		
DESTINATARIO	OFICIO Y FECHA DE NOTIFICACIÓN	CONTESTACIÓN
<i>PRI</i>	INE-UT/8221/2018 30/05/2018	El 05/06/2018, se recibió escrito de contestación al emplazamiento (dentro de los cinco días legales para tal efecto), signado por el representante del <i>PRI</i> . ²³

²⁰ Visible a fojas 102 a 104 del expediente

²¹ Visible a fojas 520 a 528 del expediente.

²² Visible a fojas 529 a 537 del expediente.

²³ Visible a fojas 561 a 564 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

IV. ALEGATOS.²⁴ Mediante acuerdo de catorce de junio de dos mil dieciocho, se ordenó poner a disposición de las partes las actuaciones que integran el presente expediente, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, dicho proveído fue notificado y desahogado en los siguientes términos:

VISTA PARA ALEGATOS			
	DESTINATARIOS	OFICIO Y FECHA DE NOTIFICACIÓN	CONTESTACIÓN
	PRI	INE-UT/9526/2018 ²⁵ 27/11/2017	Oficio PRI/REP-INE/0493/2018 25/06/2018. ²⁶
1.	Jorge Luis Trujillo Lorena	INE/CHIS/JDE09/VS/256/2018 ²⁷ 15/06/2018	No compareció
2.	Juan Carlos Brito Noh	INE/JLE/VS/700/2018 19/06/2018 ²⁸	Mediante escrito de 20/06/2018, en lo sustancial refiere que ratifica su escrito inicial de queja de 9 de febrero de 2018, mediante el cual hizo constar su voluntad de no estar afiliado al PRI, por lo que solicita la cancelación del registro de afiliación indebida. ²⁹
3.	Celia Medina Moya	INE/COL/JLE/1293/2018 ³⁰ 15/06/2018	No compareció
4.	Cynthia Elena Almanza Vásquez	INE/JDE-05/VS/0716/2018 20/06/2018 ³¹	No compareció
5.	José Antonio Hernández García	INE-JDE36-MEX/VE/0928/2018 ³² 14/06/2018	No compareció

²⁴ Visible a fojas 565 a 569 del expediente.

²⁵ Visible a fojas 573 a 579 del expediente.

²⁶ Visible a fojas 635 del expediente.

²⁷ Visible a fojas 664 del expediente.

²⁸ Visible a página 600 del expediente

²⁹ Visible a foja 604 del expediente

³⁰ Visible a foja 593 del expediente

³¹ Visible a foja 699 del expediente

³² Visible a foja 638 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

	VISTA PARA ALEGATOS		
	DESTINATARIOS	OFICIO Y FECHA DE NOTIFICACIÓN	CONTESTACIÓN
6.	José Eli Sánchez Silva	INE/VED/565/2018 ³³ 19/06/2018	Mediante escrito de 19/06/2018, en lo sustancial refiere que nunca ha participado en acción alguna con el PRI, que lo dieron de alta en afiliación sin su consentimiento, por lo que solicita la baja de afiliación al partido político, ya que como se demuestra el partido político no proporcionó prueba alguna en la que presentara su consentimiento por lo que queda claro que su afiliación fue indebida. ³⁴
7.	Jorge Octavio Solórzano Baylon	INE/JDE/420/2018 ³⁵ 22/06/2018	No compareció
8.	Milton Ernesto Cruz Carpio	INE/JDE02/VS/328/2018 ³⁶ 14/06/2018	No compareció
9.	León Felipe Arellano Luna	INE/JDE12/VE/1553/18 ³⁷ 15/06/2018	Mediante escrito de 03/07/2018, en lo sustancial refiere que manifiesta su interés por continuar el procedimiento sancionador que lo desvincula del PRI, toda vez que afirma que ese vergonzoso instituto político lo afilió sin aviso a su persona y sin su consentimiento. ³⁸

³³ Visible a foja 631 del expediente

³⁴ Visible a foja 616 del expediente

³⁵ Visible a fojas 641 a 649 del expediente

³⁶ Visible a foja 623 del expediente

³⁷ Visible a fojas 677 del expediente

³⁸ Visible a foja 691 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

VISTA PARA ALEGATOS			
	DESTINATARIOS	OFICIO Y FECHA DE NOTIFICACIÓN	CONTESTACIÓN
10.	Rubén Juan de Dios Guerrero Chávez	INE/06JD/CHIH-0945/2018 ³⁹ 18/06/2018	No compareció
11.	María Guadalupe Cruz Martínez	INE/VSD/0202/2018 ⁴⁰ 16/06/2018	No compareció
12.	Eusenia Crisóstomo Ángeles	INE/JDE03/VE/0281/2018 ⁴¹ 15/06/2018	No compareció
13.	Gerardo Tinajero Romero	INE/MICH/JDE05/VS/354/2018 ⁴² 18/06/2018	No compareció
14.	Esperanza Hernández Casillas	INE/MICH/JDE05/VS/355/2018 ⁴³ 18/06/2018	No compareció
15.	Luis Miguel Tzakum Ek	INE/JDE-05/VS/330/2018 ⁴⁴ 15/06/2018	Mediante escrito de 22/06/2018, en lo sustancial refiere que solicita el seguimiento de su desafiliación al PRI, resolución que debió haber procedido desde el pasado 13 de noviembre de 2017, que hasta el momento sigue afiliado a dicho partido político. ⁴⁵

³⁹ Visible a foja 585 del expediente

⁴⁰ Visible a fojas 669 del expediente.

⁴¹ Visible a fojas 693 del expediente

⁴² Visible a foja 655 del expediente

⁴³ Visible a foja 652 del expediente

⁴⁴ Visible a página 612 del expediente

⁴⁵ Visible a foja 660 del expediente

V. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. En su oportunidad, se ordenó elaborar el Proyecto de Resolución correspondiente para que fuera sometido a la consideración de los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias de este Instituto.

VI. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS. En la Octogésima Cuarta Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el seis de septiembre de dos mil dieciocho, la Comisión de Quejas y Denuncias del *INE* analizó el Proyecto de Resolución del procedimiento sancionador ordinario al rubro identificado, en la cual determinó aprobarlo por unanimidad de votos de sus integrantes.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión de Quejas*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte del *PRI*, en perjuicio de los ciudadanos que han sido señalados a lo largo de la presente determinación.

Ahora bien, conforme al artículo 23 del *COFIPE*, los partidos políticos ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en el citado Código, correspondiendo al

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

Instituto Federal Electoral —hoy INE— vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n); y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho Código, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38 del dispositivo legal en cita, las cuales son sancionables por el *Consejo General*.

Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443, párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la *LGIPE* y 25 de la *LGPP*, respectivamente.

En consecuencia, siendo atribución del *Consejo General* conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta competente para conocer y resolver respecto de las presuntas infracciones denunciadas en el procedimiento sancionador ordinario, atribuidas al *PRJ* derivado, esencialmente, de las indebidas afiliaciones al citado instituto político.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,⁴⁶ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.

⁴⁶ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de ciudadanos.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIPE* —los cuales contienen reglas que ya se encontraban previstas en el *COFIPE*, en los artículos 342, párrafo 1, incisos a); 356, 361, 364, 365 y 366—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO.

En el procedimiento en que se actúa, las presuntas faltas (indebida afiliación), en algunos casos, se cometieron durante la vigencia del *COFIPE*, motivo por el cual, en las situaciones que así lo ameriten, la normativa electoral en comento, misma que se encontraba vigente al momento en que sucedieron los hechos denunciados.

En efecto, de conformidad con lo establecido en el Punto cuarto de *los Lineamientos para la Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su registro*, aprobados por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG617/2012, de treinta de agosto de dos mil doce, los Partidos Políticos Nacionales debían capturar en el *Sistema de Cómputo desarrollado por la Unidad Técnica de Servicios de Informática*, los datos de todos sus afiliados en el periodo comprendido **entre el uno de abril de dos mil trece y el treinta y uno de marzo de dos mil catorce**, siendo que precisamente el registro realizado en ese periodo corresponden las más recientes fechas de alta de los quejosos en el *PRI*.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

Ello es así, toda vez que si al momento de la comisión de algunas de las presuntas faltas se encontraba vigente el *COFIPE*,⁴⁷ es claro que este ordenamiento legal debe aplicarse para las cuestiones sustantivas que así resulten, al margen que las faltas pudieran haber sido advertidas por los quejosos y cuestionadas mediante ciertas quejas que dieron origen al presente asunto, una vez que dicha norma fue abrogada por la *LGIPE*, así como que este último ordenamiento sea fundamento para cuestiones procesales o adjetivas.

Asimismo, para los ciudadanos de los que no se tiene la fecha de afiliación, se tomará en cuenta, aquella en la que éstos presentaron sus respectivos escritos de queja.

Lo anterior, de acuerdo con el criterio adoptado por el Consejo General de este Instituto en la Resolución INE/CG30/2018, misma que fue confirmada el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-18/2018, **en el sentido de que al ser imposible establecer la fecha precisa en que se realizó la afiliación al instituto político, se tomaría la de presentación de la denuncia, porque era la única sobre la que se tenía certeza respecto a esa situación.**

Hipótesis que, en algunos casos del presente asunto se actualiza, en razón de que de lo manifestado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto en desahogo del requerimiento que le fue formulado y ante la omisión del *PRI*, no es posible advertir la fecha de la supuesta afiliación de los denunciantes.

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO

1. LITIS

En el presente asunto se deberá determinar si el *PRI* afilió indebidamente o no a los ciudadanos que alegan no haber dado su consentimiento para estar en sus filas, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo

⁴⁷ El COFIPE estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce.

segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIFE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u), de la *LGPP*.

Aunado a lo anterior, también se procederá a establecer si fue conforme a derecho el actuar del *PRI*, respecto a la renuncia presentada por Luis Miguel Tzakum Ek, en torno a que se le diera de baja del padrón de afiliados de dicho partido político.

2. Excepciones y defensas

En respuesta a dicha imputación el *PRI*, a través de su Representante ante el *Consejo General* de este Instituto, en síntesis, hizo valer en su defensa lo siguiente:⁴⁸

- Se da respuesta al emplazamiento realizado mediante oficio SARP/763/2018 de cinco de junio del año en curso, suscrito por el Subsecretario de Afiliación y Registro Partidario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, mismo que adjunta en copia simple y del que se desprende, en esencia, lo siguiente:
- Después de una minuciosa búsqueda en los archivos con que cuenta la Subsecretaría de Afiliación y Registro Partidario del CEN del PRI, encontramos que, de los quince ciudadanos quejosos, dos si se encuentran afiliados y cuentan con su respectivo formato de afiliación, dos registros cuentan con declaratoria de renuncia.
- Derivado de la excesiva carga de trabajo y el poco tiempo que le otorga la autoridad electoral a dicho instituto político para la contestación respectiva, al momento de presentar su escrito de comparecencia al procedimiento sancionador, se encontraban recabando la información de los once ciudadanos restantes, para poder dar razón de su estatus.
- No es de tomarse en consideración el argumento de los quejosos que pretenden hacer valer su pretensión únicamente en su dicho, desconociendo el día de hoy su participación dentro de dicho instituto político. Esto

⁴⁸ Visible a fojas 561 a 564 y 635 a 637 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

atendiendo que en ningún momento ofrecen alguna prueba contundente que demuestre la afiliación indebida de la que supuestamente son víctimas.

- Se da respuesta al requerimiento para formular alegatos con la respuesta que mediante oficio SARP/792/2018, de veinticinco de junio del año en curso, remitió el Subsecretario de Afiliación y Registro Partidario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, mismo que adjunta en copia simple y del que se desprende, en esencia, lo siguiente:
- Tal y como consta en el expediente en que se actúa, los CC. José Antonio Hernández García y Gerardo Tinajero Romero, sí se encuentran registrados en dicho instituto político, situación que se acreditó con la cédula de afiliación respetiva y en el momento procesal oportuno.
- En el caso de los CC. Jorge Luis Trujillo Lorena, Milton Ernesto Cruz Carpio y Esperanza Hernández Casillas, no forman parte de dicho instituto político, en virtud de que llevaron a cabo su procedimiento de renuncia a la militancia. Situación que quedó debidamente demostrada en la etapa probatoria mediante las documentales públicas ofrecidas al respecto.
- Por otra parte, en relación con el resto de los ciudadanos quejosos dentro del expediente en que se actúa, manifestó que derivado del poco tiempo que proporcionó la autoridad electoral para la búsqueda de la información, así como la carga de trabajo que tiene dicho instituto político derivado del Proceso Electoral 2017-2018, no ha sido posible concluir con la digitalización del archivo y dada la necesidad de buscar de manera física dicha información, los recursos operativos con los que cuentan han limitado la capacidad de recabar la información solicitada, no obstante seguimos con la búsqueda referida con anterioridad, por lo que resulta inviable y contradictorio proporcionar un estatus de afiliación a ciudadanos de quienes no se tiene claridad y/o información verificada.
- Los quejosos pretenden hacer valer sus pretensiones únicamente en su dicho, desconociendo su participación dentro de dicho partido político, también es de considerarse que en ningún momento ofrecen alguna prueba contundente que demuestre la afiliación indebida de la que supuestamente fueron víctimas.

Con relación a las excepciones y defensas hechas valer por el partido, por cuestión de método y debido a su estrecha vinculación con el análisis necesario para dilucidar la controversia, se atenderán en el fondo del presente asunto.

3. MARCO NORMATIVO

A) Constitución, tratados internacionales y ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: ...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

...

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33, de la *Constitución*.

Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 24/2002 emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES**.⁴⁹

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación* de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,⁵⁰ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación* de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos

⁴⁹ Consultable en la página: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

⁵⁰ Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes —asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación

política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

Artículo 23. *Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:*

I...

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;
- Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
- Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGPE*, que es obligación de

los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *H. Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su constitución y registro.

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la *Constitución* y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular,

hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna del PRI

Estatutos del PRI

De la Integración del Partido

Artículo 22. *El Partido Revolucionario Institucional está integrado por ciudadanos mexicanos, hombres y mujeres, que se afilien individual y libremente y suscriban los Documentos Básicos del Partido. Los integrantes individuales del Partido podrán incorporarse libremente a las organizaciones de los sectores, organizaciones nacionales y adherentes.*

Sección 1. De las personas afiliadas.

Artículo 23. *El Partido establece entre sus integrantes las siguientes categorías, conforme a las actividades y las responsabilidades que desarrollen:*

I. Miembros, a las personas ciudadanas, hombres y mujeres, en pleno goce de sus derechos políticos, afiliados al Partido;

II. Militantes, a las y los afiliados que desempeñen en forma sistemática y reglamentada las obligaciones partidarias;

III. Cuadros, a quienes con motivo de su militancia:

a) Hayan desempeñado cargos de dirigencia en el Partido, sus sectores, organizaciones nacionales y adherentes.

b) Hayan sido candidatas o candidatos del Partido, propietarias o propietarios y suplentes, a cargos de elección popular.

c) Sean o hayan asumido la representación del Partido o de sus candidatas o candidatos ante los órganos electorales, casillas federales, de la entidad federativa, distritales, municipales o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

d) Hayan egresado de las instituciones de capacitación política del Partido, o de los centros especializados de los sectores, organizaciones nacionales y adherentes, y desempeñado comisiones partidistas.

e) Desempeñen o hayan desempeñado un cargo de responsabilidad política, dentro de los diferentes órganos de dirección del Partido o en sus organizaciones en los diversos niveles de su estructura.

f) Participen de manera formal y regular durante las campañas electorales de las candidatas y los candidatos postulados por el Partido.

g) Quienes hayan participado en asambleas y convenciones del Partido; o

h) Las y los directivos de las fundaciones y de los organismos especializados y sus antecedentes; y

IV. Dirigentes, a los integrantes:

a) De los órganos de dirección deliberativos, previstos en las fracciones I, II, III, VII y VIII del artículo 66;

b) De los órganos de dirección ejecutivos, previstos en las fracciones IV y XI del artículo 66;

c) De los órganos de defensoría y jurisdiccionales, previstos en las fracciones V, VI, IX y X del artículo 66; y

d) De los órganos de representación territorial previstos en la fracción XII del artículo 66 y el párrafo segundo del artículo 55. El Partido registrará ante las autoridades competentes a las y los integrantes de los órganos de dirección ejecutivos. El Partido asegurará la igualdad de derechos y obligaciones entre sus integrantes, con las excepciones y limitaciones que impongan las leyes en cuanto al ejercicio de derechos políticos y las salvedades que establecen los presentes Estatutos y el Código de Ética Partidaria. Las relaciones de las personas afiliadas entre sí se regirán por los principios de igualdad de derechos y obligaciones que les correspondan, así como por los principios de la ética partidaria.

Artículo 24. *Independientemente de las categorías a que hace referencia el artículo anterior, el Partido reconoce como simpatizantes a las personas ciudadanas no afiliadas que se interesan y participan en sus programas y actividades. Las y los simpatizantes tendrán los siguientes derechos:*

I. Solicitar su afiliación como miembros del Partido;

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

II. Participar de los beneficios sociales, culturales y recreativos derivados de los programas del Partido;

III. Ejercer su derecho a voto, por las y los candidatos o dirigentes del Partido, cuando las convocatorias respectivas así lo consideren;

y IV. Aquéllos que le reconozcan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados de derechos humanos de los que sea parte el Estado mexicano.

[...]

Capítulo V De los Mecanismos de Afiliación

Artículo 54. *Podrán afiliarse al Partido Revolucionario Institucional los ciudadanos mexicanos, hombres y mujeres, que personal, pacífica, libre e individualmente, y en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Legislación Electoral vigente y estos Estatutos, expresen su voluntad de integrarse al Partido, comprometiéndose con su ideología y haciendo suyos los Documentos Básicos.*

Artículo 55. *La afiliación al Partido se hará ante la sección en cuya demarcación se encuentre el domicilio del solicitante o ante el comité municipal o delegacional, estatal o nacional correspondiente o en los módulos itinerantes o temporales establecidos para tal fin, así como en Internet, quienes notificarán al órgano partidista superior para que se incluya en el Registro Partidario, refiriendo al afiliado al seccional de su domicilio, como ámbito para el desarrollo de sus actividades políticas y electorales.*

Una vez afiliado, el Partido otorgará al ciudadano la credencial y documento que acredite su calidad de miembro. En tratándose de reafiliación de aquéllos que hayan salido del Partido en forma voluntaria o de afiliación al mismo de quien provenga de otro partido político, la Comisión de Justicia Partidaria que corresponda deberá hacer la declaratoria respectiva una vez que el interesado acredite haber cumplido con el proceso de capacitación ideológica.

La dirigencia del Partido, en todos sus niveles, mantendrá programas permanentes de afiliación y credencialización.

Artículo 56. *Podrán afiliarse al Partido Revolucionario Institucional los hombres y las mujeres con ciudadanía mexicana, que personal, pacífica, libre e individualmente, y en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Legislación Electoral vigente y estos Estatutos, expresen su voluntad de integrarse al Partido, comprometiéndose con su ideología y haciendo suyos los Documentos Básicos.*

Artículo 57. *La persona que desee afiliarse al Partido podrá hacerlo ante el Comité Seccional, el Comité Municipal o el Comité de la demarcación territorial en el caso de la Ciudad de México, que correspondan a su domicilio. También podrá hacerlo ante el*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

Comité Directivo de la entidad federativa donde resida, o ante el Comité Ejecutivo Nacional. De igual forma podrá afiliarse en los módulos itinerantes o temporales que se establezcan. La instancia del Partido que reciba la afiliación lo notificará al órgano superior competente para la inclusión del nuevo miembro en el Registro Partidario y, en su caso, referirá a la afiliada o el afiliado al Comité Seccional de su domicilio, como ámbito para el desarrollo de sus actividades políticas y electorales.

El Partido establecerá el servicio de reafiliación en su página electrónica, que el solicitante deberá completar en cualquiera de los Comités referidos en el párrafo anterior.

Una vez cumplido lo anterior, el Partido otorgará la credencial y documento que acredite su afiliación.

Tratándose de la reafiliación de quienes hayan salido del Partido en forma voluntaria o de afiliación al mismo de quien provenga de otro partido político, se seguirá el procedimiento previsto por el Código de Ética Partidaria.

La dirigencia del Partido, en todos sus niveles, mantendrá programas permanentes de afiliación y credencialización.

CÓDIGO DE JUSTICIA PARTIDARIA DEL PRI

De la Declaratoria de Renuncia

Artículo 120. Los militantes que renuncien voluntariamente al Partido, deberán hacerlo por escrito dirigido a la Comisión de Justicia Partidaria de la entidad federativa en que radique, solicitando la declaratoria respectiva.

Artículo 121. La Comisión de Justicia Estatal o del Distrito Federal según corresponda, sustanciará la solicitud, otorgando un término de diez días hábiles para que sea ratificada o retirada. De no comparecer en dicho plazo, se tendrá por no interpuesto el escrito de solicitud de renuncia.

Artículo 122. Los miembros del Partido que soliciten la declaratoria de la pérdida de militancia prevista en el artículo 63 de los Estatutos, deberán cumplir los siguientes requisitos:

- I. Presentar su solicitud por escrito donde se haga constar nombre y firma del solicitante, nombre y domicilio de la o el militante denunciado, la narración de los hechos que se evidencian relacionados con las hipótesis del citado artículo 63; y*
- II. Acompañar las pruebas con las que pretenda demostrar las imputaciones.*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

En los casos a que se refieren las fracciones II y III del artículo 63 de los Estatutos, cuando se trate de hechos públicos y notorios, bastará la solicitud que formule la Secretaría Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria para que ésta emita la declaratoria de la pérdida de militancia. Todo procedimiento que se instaure para la instrucción de la solicitud de pérdida de militancia, se sujetará a las reglas contenidas en el Libro Cuarto, Título Primero de este ordenamiento.

Artículo 123. Una vez emitida la declaratoria correspondiente, será notificada al interesado y, para los efectos procedentes, a la Comisión Nacional y a la Secretaría de Organización del Comité Nacional, Directivo o del Distrito Federal respectivo.

D) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

4. CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante del *PRI*, por regla general debe acudir a las instancias partidistas competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.

En consecuencia, los partidos políticos (en el caso el *PRI*) tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas

afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del *COFIPE*, precepto que, derivado de la reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la *LGPP*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que además los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la *Constitución*, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y voluntaria.

- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la *Sala Superior*, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**,⁵¹ donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia 21/2013, de rubro **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,⁵² el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria⁵³ y como estándar probatorio.⁵⁴

⁵¹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_judiccial/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

⁵² Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.

⁵³ Tesis de Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

⁵⁴ Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. Véase la nota 35.

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación⁵⁵ ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la *Sala Superior* consideró en la sentencia referida, que para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

⁵⁵ Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO**.

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con fundamento en el diverso 441 de la *LG/PE*, lo que implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento ordinario sancionador una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar

las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberadamente la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

5. HECHOS ACREDITADOS Y PRECISIONES

Como se ha mencionado, las denuncias presentadas por los afectados versan sobre la sobre la supuesta violación a su derecho de libertad de afiliación, al ser incorporados al padrón del *PRI*, sin su consentimiento, así como la utilización de sus datos personales por dicho partido político para sustentar tal afiliación.

Ahora bien, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de la infracción denunciada, debe precisarse lo siguiente:

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
1	Jorge Luis Trujillo Lorena	09/febrero/2018	Correo electrónico de 15 de marzo de 2018, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, donde informa que el ciudadano sí está afiliado al PRI. Asimismo, precisa que existe cancelación del registro el 09/marzo/2018	Oficios PRI/REP-INE/242/2018, PRI/REP-INE/0438/2018 y PRI/REP-INE/0493/2018, firmados por el representante suplente del PRI ante el Consejo General del INE, a través del cual remitió la información proporcionada por el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político, en los cuales se indica que Jorge Luis Trujillo Lorena, se afilió al partido político en cita y, posteriormente, solicitó su baja, emitiéndose una declaratoria acordando dicha circunstancia.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del <i>PRI</i>, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida, ello, independientemente de que el instituto político en cita, aduzca que dicho ciudadano solicitó su baja y la misma se concedió, pues no aportó el documento donde conste que solicitó su baja y la misma fue ratificada.</p>				

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
2	Juan Carlos Brito Noh	08/febrero/2018	Correo electrónico de 15 de marzo de 2018, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, donde informa que el ciudadano sí está afiliado al PRI	Oficios PRI/REP-INE/242/2018, PRI/REP-INE/0350/2018, PRI/REP-INE/0438/2018 y PRI/REP-INE/0493/2018, firmados por el representante suplente del PRI ante el Consejo General del INE, a través del cual remitió la información proporcionada por el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político, en los cuales no se proporcionó información alguna respecto a la afiliación de Juan Carlos Brito Noh, al partido político en cita.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del <i>PRI</i>, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
3	Celia Medina Moya	07/febrero/2018	Correo electrónico de 15 de marzo de 2018, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, donde informa que la ciudadana sí está afiliada al PRI	Oficios PRI/REP-INE/242/2018, PRI/REP-INE/0350/2018, PRI/REP-INE/0438/2018 y PRI/REP-INE/0493/2018, firmados por el representante suplente del PRI ante el Consejo General del INE, a través del cual remitió la información proporcionada por el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político, en los cuales no se proporcionó información alguna respecto a la afiliación de Celia Medina Moya, al partido político en cita.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del <i>PRI</i>, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida.</p>				

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
4	Cynthia Elena Almanza Vásquez	02/febrero/2018	Correo electrónico de 15 de marzo de 2018, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, donde informa que la ciudadana sí está afiliada al PRI	Oficios PRI/REP-INE/242/2018, PRI/REP-INE/0350/2018, PRI/REP-INE/0438/2018 y PRI/REP-INE/0493/2018, firmados por el representante suplente del PRI ante el Consejo General del INE, a través del cual remitió la información proporcionada por el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político, en los cuales no se proporcionó información alguna respecto a la afiliación de Cynthia Elena Almanza Vásquez, al partido político en cita.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del <i>PRI</i>, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
5	José Antonio Hernández García	13/febrero/2018	Correo electrónico de 15 de marzo de 2018, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, donde informa que el ciudadano sí está afiliado al PRI	Oficios PRI/REP-INE/242/2018, PRI/REP-INE/0438/2018 y PRI/REP-INE/0493/2018, firmados por el representante suplente del PRI ante el Consejo General del INE, a través del cual remitió la información proporcionada por el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político, en los cuales se indica que José Antonio Hernández García, sí se encuentra afiliado a dicho ente político, proporcionando copia simple de su cédula de afiliación.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir un documento idóneo aportado por el <i>PRI</i>, en tanto que únicamente ofreció como prueba copia simple de la cédula de afiliación, se concluye que se trata de una afiliación indebida</p>				

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
6	José Eli Sánchez Silva	09/febrero/2018	Correo electrónico de 15 de marzo de 2018, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, donde informa que el ciudadano sí está afiliado al PRI	Oficios PRI/REP-INE/242/2018, PRI/REP-INE/0350/2018, PRI/REP-INE/0438/2018 y PRI/REP-INE/0493/2018, firmados por el representante suplente del PRI ante el Consejo General del INE, a través del cual remitió la información proporcionada por el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político, en los cuales no se proporcionó información alguna respecto a la afiliación de José Eli Sánchez Silva, al partido político en cita.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del <i>PRI</i>, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
7	Jorge Octavio Solórzano Baylon	09/febrero/2018	Correo electrónico de 15 de marzo de 2018, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, donde informa que el ciudadano sí está afiliado al PRI	Oficios PRI/REP-INE/242/2018, PRI/REP-INE/0350/2018, PRI/REP-INE/0438/2018 y PRI/REP-INE/0493/2018, firmados por el representante suplente del PRI ante el Consejo General del INE, a través del cual remitió la información proporcionada por el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político, en los cuales no se proporcionó información alguna respecto a la afiliación de Jorge Octavio Solórzano Baylon, al partido político en cita.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del <i>PRI</i>, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida.</p>				

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
8	Milton Ernesto Cruz Carpio	20/febrero/2018	Correo electrónico de 15 de marzo de 2018, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, donde informa que el ciudadano sí está afiliado al PRI . Asimismo, precisa que existe cancelación del registro el 09/marzo/2018	Oficios PRI/REP-INE/242/2018, PRI/REP-INE/0438/2018 y PRI/REP-INE/0493/2018, firmados por el representante suplente del PRI ante el Consejo General del INE, a través del cual remitió la información proporcionada por el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político, en los cuales se indica que Milton Ernesto Cruz Carpio, se afilió al partido político en cita y, posteriormente, solicitó su baja, emitiéndose una declaratoria acordando dicha circunstancia.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del <i>PRI</i>, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida, ello, independientemente de que el instituto político en cita, aduzca que dicho ciudadano solicitó su baja y la misma se concedió, pues no aportó el documento donde conste que solicitó su baja y la misma fue ratificada.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
9	León Felipe Arrellano Luna	19/febrero/2018	Correo electrónico de 15 de marzo de 2018, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, donde informa que el ciudadano sí está afiliado al PRI	Oficios PRI/REP-INE/242/2018, PRI/REP-INE/0350/2018, PRI/REP-INE/0438/2018 y PRI/REP-INE/0493/2018, firmados por el representante suplente del PRI ante el Consejo General del INE, a través del cual remitió la información proporcionada por el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político, en los cuales no se proporcionó información alguna respecto a la afiliación de León Felipe Arrellano Luna, al partido político en cita.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del <i>PRI</i>, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida.</p>				

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
10	Rubén Juan de Dios Guerrero Chávez	19/febrero/2018	Correo electrónico de 15 de marzo de 2018, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, donde informa que el ciudadano sí está afiliado al PRI	Oficios PRI/REP-INE/242/2018, PRI/REP-INE/0350/2018, PRI/REP-INE/0438/2018 y PRI/REP-INE/0493/2018, firmados por el representante suplente del PRI ante el Consejo General del INE, a través del cual remitió la información proporcionada por el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político, en los cuales no se proporcionó información alguna respecto a la afiliación de Rubén Juan de Dios Guerrero Chávez, al partido político en cita.

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del *PRI*, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida.

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
11	María Guadalupe Cruz Martínez	19/febrero/2018	Correo electrónico de 15 de marzo de 2018, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, donde informa que la ciudadana sí está afiliada al PRI	Oficios PRI/REP-INE/242/2018, PRI/REP-INE/0350/2018, PRI/REP-INE/0438/2018 y PRI/REP-INE/0493/2018, firmados por el representante suplente del PRI ante el Consejo General del INE, a través del cual remitió la información proporcionada por el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político, en los cuales no se proporcionó información alguna respecto a la afiliación de María Guadalupe Cruz Martínez, al partido político en cita.

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del *PRI*, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
12	Eunisenia Crisostomo Ángeles	10/febrero/2018	Correo electrónico de 15 de marzo de 2018, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, donde informa que la ciudadana sí está afiliada al PRI	Oficios PRI/REP-INE/242/2018, PRI/REP-INE/0350/2018, PRI/REP-INE/0438/2018 y PRI/REP-INE/0493/2018, firmados por el representante suplente del PRI ante el Consejo General del INE, a través del cual remitió la información proporcionada por el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político, en los cuales no se proporcionó información alguna respecto a la afiliación de Eunisenia Crisostomo Ángeles, al partido político en cita.

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del *PRI*, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida.

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
13	Gerardo Tinajero Romero	21/febrero/2018	Correo electrónico de 15 de marzo de 2018, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, donde informa que el ciudadano sí está afiliado al PRI	Oficios PRI/REP-INE/242/2018, PRI/REP-INE/0438/2018 y PRI/REP-INE/0493/2018, firmados por el representante suplente del PRI ante el Consejo General del INE, a través del cual remitió la información proporcionada por el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político, en los cuales se indica que Gerardo Tinajero Romero, sí se encuentra afiliado a dicho ente político, proporcionando copia simple de su cédula de afiliación.

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir un documento idóneo aportado por el *PRI*, en tanto que únicamente ofreció como prueba copia simple de la cédula de afiliación, se concluye que se trata de una afiliación indebida.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
14	Esperanza Hernández Casillas	21/febrero/2018	Correo electrónico de 15 de marzo de 2018, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, donde informa que la ciudadana sí está afiliada al PRI	Oficios PRI/REP-INE/0438/2018 y PRI/REP-INE/0493/2018, firmados por el representante suplente del PRI ante el Consejo General del INE, a través del cual remitió la información proporcionada por el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político, en los cuales se indica que Esperanza Hernández Casillas, se afilió al partido político en cita y, posteriormente, posteriormente, solicitó su baja, emitiéndose una declaratoria acordando dicha circunstancia.

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del *PRI*, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida, ello, independientemente de que el instituto político en cita, aduzca que dicho ciudadano solicitó su baja y la misma se concedió, pues no aportó el documento donde conste que solicitó su baja y la misma fue ratificada.

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
15	Luis Miguel Tzakum Ek	26/febrero/2018	Correo electrónico de 15 de marzo de 2018, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, donde informa que el ciudadano sí está afiliado al PRI	Oficios PRI/REP-INE/242/2018, PRI/REP-INE/0350/2018, PRI/REP-INE/0438/2018 y PRI/REP-INE/0493/2018, firmados por el representante suplente del PRI ante el Consejo General del INE, a través del cual remitió la información proporcionada por el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político, en los cuales no se proporcionó información alguna respecto a la afiliación de Luis Miguel Tzakum Ek, al partido político en cita.

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del *PRI*, y que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida.

Las constancias aportadas por la *DEPPP*, al ser documentos generados en ejercicio de sus atribuciones se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del Reglamento de Quejas, mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la *LGIPE* y 27, párrafo 2 del Reglamento citado tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran controvertidas ni desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

Por otra parte, las documentales allegadas al expediente por el partido político denunciado, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracción II del *Reglamento Quejas* y, por tanto, por sí mismas carecen de valor probatorio pleno; sin embargo, podrán generar plena convicción en esta autoridad, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio; ello, al tenor de los artículos 462, párrafo 3 de la *LGIPE*, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención.

1. CASO CONCRETO

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por los quejosos, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5, del *COFIPE*, cuyo contenido se replica en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; esto es, partido político, candidato o inclusive cualquier persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De esta forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

En tal sentido, por cuanto hace a la existencia del supuesto normativo, debe reiterarse, como se estableció en apartados previos, que desde hace décadas está reconocido en la legislación de este país, la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, y de igual manera, que las personas en este país tienen el derecho de que se proteja su información privada y sus datos personales, todo lo cual está previsto desde el nivel constitucional.

En el caso, si bien en el marco normativo se hace referencia a los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, identificados con el número de resolución CG617/2012 y, de igual manera se transcribe la parte de disposiciones estatutarias del partido político denunciado, relacionada con el procedimiento de afiliación, lo cierto es que, por el carácter constitucional de tales derechos, la existencia de los mismos —y las obligaciones correlativas a éstos—, no está condicionada al reconocimiento por parte de los sujetos obligados, en este caso, de los partidos políticos.

En otras palabras, si la libertad de afiliación política, en todas sus vertientes, es un derecho de los ciudadanos de este país desde hace varios decenios, resulta por demás evidente que las obligaciones de los partidos políticos que deriven de esta garantía -respetar la libertad de afiliación y, de ser necesario, acreditar que la incorporación a cada instituto político- no debe estar sujeta o condicionada a que éstos establezcan en sus normas internas disposiciones encaminadas a su protección, es decir, no depende, del momento en el que los partidos políticos hayan incluido en sus normas internas la obligación de que la afiliación sea voluntaria.

Por cuanto hace al elemento subjetivo señalado líneas arriba, debe destacarse que, la autoridad, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, debe contar con

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

En principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento que formula en contra de la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde al quejoso.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441, de la *LGIE*.

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que contaba con el consentimiento de los quejosos para afiliarlos a su partido político, y no a los ciudadanos que negaron haber solicitado su inclusión en el padrón de militantes.

Como vimos, en el apartado anterior, está demostrado a partir de la información proporcionada por la *DEPPP* que los ciudadanos denunciados, se encontraron, en ese momento, como afiliados del *PRI*.

Por otra parte, en los casos que comprenden el presente procedimiento, el *PRI* no demuestra con medios de prueba, que la afiliación respectiva fue el resultado de la

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

manifestación de la voluntad libre e individual de los ciudadanos, en los cuales *motu proprio*, expresaron su consentimiento y, por ende, proporcionaron sus datos personales a fin de llevar a cabo la afiliación a dicho instituto político.

Así pues, en estos casos la carga de la prueba corresponde al *PRI*, en tanto que el dicho de los actores consiste en afirmar que no dieron su consentimiento para ser afiliados, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba; en tanto que el partido político, cuya defensa consiste básicamente en afirmar que sí cumplieron las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación, tienen el deber de probar esa situación.

Ahora bien, tal y como quedó de manifiesto apartados arriba, **la libertad de afiliación en materia político-electoral, es un derecho reconocido y así garantizado para todo ciudadano de nuestro país**, al menos desde hace varias décadas, tanto a nivel constitucional como legal, **el cual es concebido como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido político, permanecer afiliado a éste, desafilarse e, incluso, no pertenecer a ninguno.**

Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección de datos personales e información relacionada con la vida privada de las personas, es igualmente un derecho con una trayectoria de protección por demás lejana.

En este sentido, la garantía y protección a los citados derechos, evidentemente no deriva de disposiciones reglamentarias al interior de los institutos políticos, que prevean como obligación del partido político la conservación de los expedientes de afiliación de cada miembro, ni tampoco a partir de la emisión de los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, emitidos por el propio *IFE* ahora *INE* en la Resolución CG617/2012, sino que, como se vio, el derecho tutelado deviene de disposiciones de rango supremo, el cual debe ser tutelado en todo momento, y no a partir de normas internas o reglamentarias que así lo establezcan.

En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos políticos, en todas sus vertientes, es un derecho de los ciudadanos previsto como garantía constitucional, también lo es la obligación de los partidos políticos de

preservar, y en su caso, de demostrar, en todo momento, que cualquier acto que engendre la voluntad de un ciudadano para formar parte en las filas de un instituto político, o bien, ya no pertenecer a estos, deben estar amparados en el o los documentos que demuestren indefectiblemente el acto previo del consentimiento – para los casos en que se aduce no mediar consentimiento previo para ser afiliados- siendo **ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no se tiene o tenía el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes**, o –para el caso de la omisión de atender solicitudes de desafiliación- demostrar que dieron cauce legal a las solicitudes de desafiliación de manera pronta y oportuna y, que derivado de ello, ya no se encuentran en sus registros de militantes.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior, incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que en su defensa se deben presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

Con base en todo lo expuesto, toda vez que los denunciantes manifiestan no haber otorgado su consentimiento para ser agremiados al partido; que está comprobada la afiliación de todos, y que el *PRI*, no cumplió su carga para demostrar que la afiliación sí se solicitó voluntariamente, tal y como se expondrá más adelante, **esta autoridad electoral considera que existe una vulneración al derecho de afiliación de los quejosos y que, intrínsecamente, para la configuración de esa falta, se utilizaron sin autorización sus datos personales**, lo cual, debe ser considerado para la imposición de la sanción que, en cada caso, amerite.

En este sentido, el estudio de fondo del presente asunto se realizará en dos apartados, uno por cuanto hace a los ciudadanos José Antonio Hernández García y Gerardo Tinajero Romero, de quien se tiene evidencia en autos que se afiliaron de manera voluntaria al *PRI*, y; por otra parte, aquellos que fueron afiliados indebidamente, al partido político denunciado, es decir, sin mediar su consentimiento previo para ello.

CIUDADANOS DE QUIENES EL *PRI* CONCULCÓ SU DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN, EN SU MODALIDAD POSITIVA —INDEBIDA AFILIACIÓN—

Como quedó evidenciado, en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, está demostrado, a partir de la información proporcionada por la *DEPPP* y el propio instituto político denunciado, que los quejosos se encuentran o encontraron, en algún momento, como afiliados del *PRI*.

Asimismo, es importante recalcar que el *PRI*, únicamente admitió la afiliación de José Antonio Hernández García, Gerardo Tinajero Romero, mientras que en lo que corresponde a Jorge Luis Trujillo, Milton Ernesto Cruz Carpio y Esperanza Hernández Casillas, informó que solicitaron su baja como afiliados del partido y la misma se acordó, y respecto de Juan Carlos Brito Noh, Celia Medina Moya, Cynthia Elena Almanza Vásquez, José Eli Sánchez Silva, Jorge Octavio Solórzano Baylon, León Felipe Arrellano Luna, Rubén Juan de Dios Guerrero Chávez, María Guadalupe Cruz Martínez, Eunisenia Crisostomo Ángeles y Luis Miguel Tzakum Ek, no admitió ni negó la militancia de estos, únicamente se limitó a señalar que continuaba en la búsqueda de la información relacionada con los mismos.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

En ese sentido, el *PRI*, no demuestra con medios de prueba mínimos e idóneos, que la afiliación respectiva sea el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de los ciudadanos, en los cuales, ellos mismos, *motu proprio*, expresaron su consentimiento y, por ende, proporcionaron sus datos personales a fin de llevar a cabo la afiliación a dicho instituto político.

Al respecto, se debe recordar que, para el caso que nos ocupa, la carga de la prueba en torno a la acreditación de la voluntad de los quejosos referente a su incorporación a las filas del partido corresponde al *PRI*, en tanto que el dicho de los actores consiste en sostener que no dieron su consentimiento para ser afiliados, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba; por lo tanto, los partidos políticos, cuya defensa consiste básicamente en afirmar que sí cumplieron las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación, tienen el deber de probar esa situación.

Precisado lo anterior, se procede al análisis de los casos particulares, conforme a lo siguiente:

a) Casos en los que el PRI no se pronunció sobre la afiliación de los ciudadanos.

Dentro de este supuesto se encuentran Juan Carlos Brito Noh, Celia Medina Moya, Cynthia Elena Almanza Vásquez, José Eli Sánchez Silva, Jorge Octavio Solórzano Baylon, León Felipe Arrellano Luna, Rubén Juan de Dios Guerrero Chávez, María Guadalupe Cruz Martínez, Eunisenia Crisostomo Ángeles, sobre los cuales el partido político denunciado fue omiso en pronunciarse respecto a su afiliación, argumentando que derivado de los tiempos electorales en que se encontraban y las cargas de trabajo, continuaban en la búsqueda de la información relacionada con los ciudadanos en cita, sin admitir o negar que los mismos fueran sus militantes, sin embargo, tenía y tiene la obligación de verificar, revisar y constatar fehacientemente que estos otorgaron, de forma personal, libre y voluntaria, su intención de afiliarse a sus filas, a través de los respectivos documentos y formatos en los que se constara y probara ese hecho.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

En ese sentido, debe precisarse que el partido político en comento tiene el deber de **conservar y resguardar** con el debido cuidado y, para el caso, **exhibir**, la documentación soporte en la que conste la afiliación libre y voluntaria de sus militantes o afiliados, puesto que, se insiste, le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Por lo que, es válido concluir que el *PRI* no demostró que la afiliación de los diez ciudadanos, cuyo caso se analiza en este apartado, se realizó a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que dichos denunciados hayan dado su consentimiento libre para ser afiliados.

Ello, en virtud de que su normativa interna, específicamente el *Reglamento para la Afiliación y del Registro Partidario*, establece lo siguiente:

- El artículo 14, refiere que los documentos que deberá presentar el ciudadano para poder afiliarse al *PRI* son, credencial para votar, comprobante de domicilio y el formato de afiliación al partido, mismo que deberá ser proporcionado por la instancia correspondiente que conozca de la afiliación.
- Por su parte el numeral 15, establece que las Secretarías de Organización de los Comités Directivos Estatales y Nacional a través de sus instancias correspondientes de Afiliación y Registro Partidario **llevarán el control del registro** de todos y cada uno de los solicitantes de afiliación al partido; asimismo, llevará un folio consecutivo para las solicitudes de afiliación.
- Finalmente, el precepto 16 de dicho ordenamiento partidista prevé que la afiliación al partido se solicitará mediante el **formato Único de Afiliación al Registro Partidario** que autorice la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, o mediante escrito, en español, en el que deberán señalarse elementos como domicilio, la manifestación bajo protesta de decir verdad su

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

voluntad de pertenecer al partido, de suscribirse, cumplir y hacer cumplir los documentos básicos del mismo y sus Estatutos, así como anexar escrito de no pertenencia a diverso ente político, debiendo llevar, además, **el nombre completo y firma autógrafa o huella dactilar** en original del ciudadano solicitante.

Con base en lo anterior, es claro que el *PRI* establece ciertos requisitos específicos de afiliación para acreditar la manifestación libre, voluntaria y previa de la persona, de entre las que destacan, el folio que deberían llevar las respectivas instancias partidistas, así como la suscripción de diversos formatos, incluyendo el formato único de afiliación al registro partidario correspondiente; lo anterior, a fin de dotar de certeza respecto de la voluntad libre y sin presión de quienes deseen ser inscritos; requisitos mismos que, en el caso que se analiza no fueron cumplidos por el denunciado, tal y como lo establece su propia legislación interna.

b) Casos en los que el PRI indicó que los ciudadanos si se encuentran afiliados y proporcionó copia simple de la cédula de afiliación.

En este supuesto se encuentran José Antonio Hernández García y Gerardo Tinajero Romero.

Respecto a los ciudadanos de referencia, el *PRI* exhibió **copias simples** de los *formatos únicos de afiliación y actualización al registro partidario*, con firma autógrafa de quienes, presuntamente, lo suscribieron.

No obstante, en concepto de esta autoridad electoral, dichos medios de prueba son insuficientes para sustentar la debida afiliación de las denunciadas en cita, toda vez que la copia simple del formato antes referido no acredita la manifestación de la voluntad de los quejosos, pues el hecho de tratarse de una mera copia fotostática, impide demostrar la libre afiliación de los ciudadanos, al no constituir un medio probatorio idóneo y tratarse un mero indicio que, por sí mismo, no genera convicción de los hechos que se pretenden acreditar.

Esto es, el denunciado no presentó algún otro elemento probatorio idóneo para acreditar que sí existió la voluntad de José Antonio Hernández García y Gerardo

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

Tinajero Romero, de pertenecer a las filas de ese ente político, como lo sería, el original o copia certificada del *formato único de afiliación y actualización al registro partidario* correspondiente o, en su caso, cualquier otro documento que diera certeza a dicho medio de prueba, como lo serían, por ejemplo, documentales que evidenciara el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas, el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras; ello, a pesar de las diversas oportunidades que tuvo durante la secuela procesal que integran el procedimiento administrativo sancionador citado al rubro, lo que de suyo, permite colegir que existe un allanamiento tácito del denunciado a lo referido por los quejosos.

Por tanto, es válido concluir que los elementos probatorios aportados por el denunciado, consistentes en copia simple de los *formatos únicos de afiliación y actualización al registro partidario* de los ciudadanos cuyo caso aquí se estudia, no es suficiente ni idóneo para acreditar que medió el consentimiento expreso de éstos para querer pertenecer a la lista de agremiados del *PRI*.

En efecto, en el caso que se analiza, el *PRI* presentó copia simple de los documentos antes referidos, para demostrar la debida afiliación de José Antonio Hernández García y Gerardo Tinajero Romero, lo cual, de suyo constituye una prueba documental privada, en términos de lo dispuesto en los artículos 461, párrafo 3, inciso b) de la *LGIPE* y 22, párrafo 1, fracción II, del *Reglamento de Quejas*.

En tal virtud, dichas documentales no se consideran suficientes para tener por demostrada la voluntad de los quejosos de afiliarse al referido ente político, sino únicamente generan un indicio singular y aislado de lo que pretende probar el denunciado, toda vez que el *PRI* no proporcionó los documentos originales atinentes o algún otro que diera certeza probatoria a las copias simples, inclusive, tal y como se precisó en el apartado que antecede, dicho partido político tuvo la opción de aportar los documentos que, en el caso, debieron aportar los ciudadanos para afiliarse o el folio que en su caso generara la oficina correspondiente, pero no lo hizo.

Con base en lo expuesto, se considera que no debe concederse valor y eficacia probatoria alguna a las citadas documentales, ya que, con independencia de las

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

razones expuestas en los párrafos que preceden, esta autoridad debe privilegiar y garantizar el derecho de libertad de afiliación en favor de los ciudadanos denunciantes, toda vez que el partido político, al tratarse de un ente de interés público, tiene la obligación de acreditar con la documentación idónea la debida afiliación de los denunciantes.

En ese sentido los partidos políticos como entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están obligados a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que las afiliaciones que realizan, deben ser de manera libre, voluntaria y personal y, como consecuencia de ello, **conservar y resguardar** y, en su caso, **exhibir** la documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho.

En este sentido, se encuentran compelidos a acreditar con las pruebas idóneas y correctas que las afiliaciones se realizaron conforme a las disposiciones legales y estatutarias, pues precisamente corresponde al oferente y más, tratándose de una institución política, acompañarla con los elementos suficientes para su perfeccionamiento y consiguiente valor legal.

Siendo menester señalar que, con las documentales aludidas se dio vista a los denunciantes, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación a éste; no obstante, fueron omisos en responder a tal solicitud; sin embargo, no debe pasar por desapercibido que dichos quejosos fueron contundentes y categóricos en manifestar en sus escritos iniciales de queja, que jamás dieron su consentimiento para ser enlistados en el padrón de afiliados del denunciado.

Por tanto, se reitera que con la prueba presentada por el denunciado, no es dable concluir que existe la certeza que medió la voluntad de los ciudadanos de querer pertenecer a filas del *PRI*, al tratarse de un indicio singular y aislado que no se encuentra corroborado por algún otro medio de prueba; por lo que es claro que sólo puede arrojar indicios en torno a la veracidad de lo afirmado por el ente de interés público, incapaz de corroborar su afirmación en torno a que la afiliación de los

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

quejosos a las filas del instituto político estuvo precedida de una manifestación de voluntad libre y auténtica.

En mérito de todo lo expuesto, se colige que existe evidencia que hace suponer que la transgresión al derecho de libre afiliación, en su modalidad positiva —afiliación indebida— a la que se refiere en este apartado, fue producto de una acción ilegal por parte del *PRI*.

A similar conclusión arribó este Consejo General en la resolución INE/CG1211/2018, de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/IJS/CG/37/2017, derivado de una falta de la misma naturaleza a la que aquí se estudia, en la que se determinó que dichas documentales no se consideran suficientes para tener por demostrada la voluntad de los quejosos de afiliarse a un ente político, sino únicamente generan un indicio singular y aislado de lo que pretende probar el denunciado.

c) Casos en los que el PRI indicó que los ciudadanos renunciaron a su militancia, pero no acreditó la afiliación de los quejosos.

En este supuesto se encuentran Jorge Luis Trujillo Lorena, Milton Ernesto Cruz Carpio y Esperanza Hernández Casillas, ciudadanos que, según el *PRI*, solicitaron su renuncia a dicho partido político.

Ahora bien, para acreditar la renuncia de los ciudadanos en cita, el partido político mediante oficios PRI/REP-INE/242/2018 y PRI/REP-INE/0438/2018, proporcionó copia simple de las resoluciones de veintisiete de febrero y primero de marzo de dos mil dieciocho, emitidas por la Comisión Estatal de Justicia Partidaria, a través de las cuales dio de baja del padrón de afiliados a las personas en comento, situación que en modo alguno, exime al multicitado ente político de su obligación de acreditar que las quejosas fueron afiliadas bajo su consentimiento.

En efecto, la *litis* materia del presente procedimiento administrativo sancionador se concentra en dilucidar si los ciudadanos quejosos fueron afiliados indebidamente o

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

no al *PRI*, por lo que, el hecho de que el instituto político en comento aduzca que Jorge Luis Trujillo Lorena, Milton Ernesto Cruz Carpio y Esperanza Hernández Casillas, solicitaron su baja del padrón de militantes y ésta se concedió por parte del órgano partidista correspondiente, en nada abona para esclarecer la controversia planteada por los denunciantes.

Además, debe precisarse que, si bien, el *PRI*, aportó como una de sus pruebas, la resolución mediante la cual se dio de baja del padrón de afiliados a los quejosos en cita, lo cierto es que, no ofreció ningún documento donde se hiciera constar que los ciudadanos en comento hubieren estado afiliados de forma voluntaria al mismo, de ahí que a ningún efecto jurídico trascienda dicha cuestión.

Conforme a lo anterior, al no demostrar el *PRI*, que la afiliación respectiva sea el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de los ciudadanos, en los cuales, ellos mismos, *motu proprio*, expresaron su consentimiento y, por ende, proporcionaron sus datos personales a fin de llevar a cabo la afiliación a dicho instituto político, se considera que la misma se llevó a cabo de forma indebida.

d) Caso en el que el *PRI* omitió atender la solicitud de desafiliación.

En este supuesto se encuentra Luis Miguel Tzakum Ek, quien de conformidad con la información que obra en autos del expediente en que se actúa, indicó que el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, acudió a las oficinas del Comité Directivo Estatal del *PRI*, en Yucatán, para presentar un escrito solicitando su desafiliación al padrón de afiliados del partido político en cita.

Para acreditar dicha circunstancia, el quejoso proporcionó el acuse original del documento mediante el cual solicitó que le dieran de baja del padrón de afiliados, así como del denominado “Acuerdo de baja de afiliación”, a través del cual, el *PRI* tuvo por presentado su escrito manifestando su voluntad de renunciar a su afiliación al partido político en cita.

Ahora bien, de la información proporcionada por la *DEPPP*, se desprende que el ciudadano inconforme se encuentra afiliado al *PRI* desde el veintiocho de agosto de dos mil catorce, mientras que el partido político denunciado no proporcionó

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

información alguna, ni se pronunció respecto a la solicitud presentada por Luis Miguel Tzakum Ek, a fin de que se le diera de baja como militante.

A partir de lo mencionado, se obtienen las siguientes conclusiones:

- No está a debate, que en algún momento **el ciudadano aludido se afilió libre y voluntariamente al PRI**, con base en su propia manifestación.
- Conforme a la información proporcionada por la *DEPPP*, **se advirtió que el quejoso apareció como afiliado al PRI, desde el veintiocho de agosto de dos mil catorce.**
- El **PRI**, no realizó pronunciamiento alguno concerniente a esclarecer que sucedió con la solicitud presentada por Luis Miguel Tzakum Ek, para que le dieran de baja de su padrón de afiliados.

En este sentido, es evidente que en el caso que se analiza en este apartado, se está ante una violación al derecho de libertad de afiliación política, en su modalidad **negativa**, es decir, de desafiliación libre, **al impedir** la desincorporación del quejoso como militante del *PRI*, puesto que, se denunció la omisión de dicho partido político de darlo de baja de su padrón, previa solicitud que por escrito le fue formulada para tal efecto.

No obstante, tal y como está demostrado en autos, a la fecha de presentación de su queja —2018— Luis Miguel Tzakum Ek, se encuentra afiliado al ente político denunciado.

En efecto, tal y como se ha referido en el apartado de marco normativo de la presente Resolución, todo ciudadano mexicano tiene derecho a asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III y 41, párrafo segundo Bases I, párrafo segundo *in fine*, y IV, de la *Constitución Federal*, así como 5°, párrafo 1, del *COFIPE*, este último replicado en el diverso 3, párrafo 2, de la *LGPP*.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

Así, en ejercicio del derecho de asociación en materia político-electoral, los ciudadanos pueden formar partidos y agrupaciones políticas, cumpliendo para ello con los requisitos que establece la ley.

En este contexto, debe considerarse que el derecho de libertad de asociación política constituye la base de la formación de los partidos, de manera que, en ejercicio de esas libertades, todo ciudadano, por igual, puede formar parte de los partidos políticos, bajo la condición de cumplir con los requisitos que establece la norma, y, con base en ello, gozar de la potestad de afiliarse al instituto político de su preferencia, lo que implica indefectiblemente, la posibilidad de **desafiliarse** de éste en el momento que así lo desee.

Con base en lo anterior, se considera que existirá violación a la libertad de afiliación por parte de un partido político, cuando éste mantiene en contra de su voluntad a un ciudadano dentro de su padrón de militantes, habida cuenta que dichos institutos, en su calidad de entidades de interés público, en términos del numeral 41, Base I, de la *Constitución*, tienen el deber preponderante de garantizar el libre ejercicio de derechos fundamentales de todos los ciudadanos, entre ellos, el de libertad de afiliación política y, al no actuar de esta forma, evidentemente afecta su esfera jurídica, al relacionarlos con una fuerza política a la que ya no quieren pertenecer, siendo que su derecho a terminar el vínculo que los unía con ese partido se vio afectado.

Así las cosas, al haberse demostrado que el *PRI* no dio trámite al escrito de desafiliación presentado por el denunciante, dicha circunstancia representa una violación al derecho de libre afiliación que le asiste y derivado de ello, un uso indebido de sus datos personales, actualizando la infracción materia del procedimiento.

Lo anterior es así, toda vez que, como ya se anunció, al tratarse de un ente de interés público, está obligado, entre otras cosas, a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; lo anterior, al tenor de lo dispuesto en el inciso a) del párrafo 1, del artículo 25 de la *LGPP*.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

Esto es así, porque la presentación del escrito de solicitud de baja, genera, en automático, una serie de cargas y obligaciones para el respectivo partido político, a fin de hacer efectivo el ejercicio de ese derecho fundamental; a saber:

- Debe recibir las solicitudes de renuncia o escritos por los que se solicita la baja de su padrón, sin poner trabas o barreras injustificadas para ello.

Es decir, en ningún caso puede negarse a recibir o atender este tipo de solicitudes. Al contrario, debe remover todo obstáculo que impida o dificulte al ciudadano su presentación; incluso, debe establecer las condiciones necesarias para orientar a su militancia y dar cauce efectivo a las peticiones de esta índole.

- Cuando un órgano partidista no competente reciba una solicitud de baja o renuncia a la militancia deberá, de manera inmediata y sin mayor trámite, remitirlo al órgano partidario que resulte competente para su atención.
- El órgano partidista competente deberá atender de inmediato, sin dilaciones o retrasos injustificados, las solicitudes de desafiliación que se presenten y, consecuentemente, dar de baja de su padrón al o el petitionario en un plazo razonable.
- Cuando sea necesario que el o la interesado tengan conocimiento de un acto partidista relacionado con su solicitud de desafiliación, deberá notificarlo personalmente a la o el interesado en un tiempo breve y razonable (por ejemplo, cuando el escrito se remitió a algún otro órgano partidario, cuando el escrito no contenga firma o se presente en copia, etc.). Ello conforme a las tesis de jurisprudencia identificadas, respectivamente, con las claves **32/2010** y **31/2013**, de rubros ***DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA EXPRESIÓN 'BREVE TÉRMINO' ADQUIERE CONNOTACIÓN ESPECÍFICA EN CADA CASO*** y ***DERECHO DE PETICIÓN. LA RESPONSABLE, DEBE INFORMAR AL PETICIONARIO CUANDO CONSIDERE QUE SU SOLICITUD NO REÚNE REQUISITOS CONSTITUCIONALES.***

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

No pasa inadvertido para este órgano resolutor que en el caso que se analiza en este apartado, el quejoso ofrece como pruebas el original del acuse de recibo del escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual demostró su gestión ante el propio partido para ser desafiliado, así como el documento denominado “Acuerdo de baja de afiliación”, a través del cual, el *PRI* tuvo por presentado el referido escrito, en el cual, se manifiesta la voluntad del inconforme para renunciar a su afiliación al partido político en cita, los cuales, de suyo constituyen pruebas documentales privadas, en términos de lo dispuesto en los artículos 461, párrafo 3, inciso b) de la *LGIFE* y 22, párrafo 1, fracción II, del *Reglamento de Quejas*.

Sin embargo, dichas documentales se estiman suficientes para tener por demostrada la solicitud de desafiliación aludida y, con base en ella, tener por acreditada la omisión del partido de atender esa petición, habida cuenta que con los documentos en cita, se corrió traslado al partido político denunciado a efecto de que se pronunciara al respecto en la etapa de emplazamiento de que fue objeto, sin que el *PRI* realizara algún pronunciamiento en torno a los mismos, objetando su autenticidad o su alcance y valor probatorio, en términos de lo dispuesto en el artículo 24 del *Reglamento de Quejas*.

Con base en lo expuesto, se considera que debe concederse el valor y eficacia probatoria plena a las citadas documentales, ya que, con independencia de las razones expuestas en los párrafos que preceden, esta autoridad debe privilegiar y garantizar el derecho de libertad de afiliación en favor del denunciante, debiendo sancionar al partido por la conducta que se le imputa, a efecto de evitar en casos futuros la repetición de conductas como la que nos ocupa.

En conclusión, este órgano colegiado considera pertinente declarar **fundado** el presente procedimiento, pues se concluye que el *PRI* infringió las disposiciones electorales tendentes a demostrar la libre afiliación, tanto positiva como, en su caso, negativa, de **quince ciudadanos**, referidos con anterioridad, quienes aparecieron como afiliados a dicho instituto político, por no demostrar el **ACTO VOLITIVO** de los mismos para ser o permanecer agremiados a ese partido.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

En efecto, como se demostró anteriormente, los denunciantes que aparecieron afiliados al *PRI*, manifestaron que en momento alguno otorgaron su consentimiento para ello, y en uno de los casos, su deseo de no permanecer al mismo, siendo que dicho instituto político en ninguna circunstancia demostró lo contrario, por lo que se actualiza la violación al derecho fundamental de libre afiliación garantizado desde la Constitución y la ley, según se expuso.

Lo anterior, en tanto que el *PRI* no demostró en catorce de los casos que la afiliación se realizó a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que dichos ciudadanos hayan dado su consentimiento para ser afiliados, ni mucho menos que hayan permitido o entregado datos personales para ese fin, los cuales se estiman necesarios para procesar la afiliación, dado que estos elementos se constituyen como insumos obligados para, en su momento, llevar a cabo una afiliación, de ahí que esto sea necesario e inescindible.

Con base en ello, ante la negativa de los quejosos de haberse afiliado al *PRI*, correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de pruebas idóneas, que la afiliación se llevó a cabo a través de los mecanismos legales para ello, en donde constara fehacientemente la libre voluntad de los promoventes, lo que no hizo, siendo que el solo hecho de aparecer en su registro electrónico es insuficiente para acreditar el ejercicio libre, personal y voluntario del derecho de afiliación a ese ente.

Es decir, no basta con que los quejosos aparezcan como afiliados al *PRI* en sus registros electrónicos, sino que dicho instituto político debió demostrar, con documentación soporte o pruebas idóneas, que dicha afiliación se realizó de forma libre o voluntaria, o bien, que la aparición del nombre y datos de los quejosos en su padrón de militantes, fue consecuencia de un error involuntario o de alguna circunstancia diversa, pero no lo hizo.

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación al *PRI* implica, además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

podiera haber servido de base o justificación al partido político para afiliar a los ahora quejosos.

Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales, tiene íntima vinculación con la indebida afiliación de los quejosos, lo cual ya quedó debidamente acreditado y, como consecuencia de ello, merece la imposición de las sanciones que se determinarán en el apartado correspondiente.

Cabe referir que a similar conclusión arribó este Consejo General en la resolución INE/CG120/2018, de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/ALC/CG/39/2017, así como en la resolución INE/CG/448/2018, de once de mayo de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2018, las cuales fueron confirmadas por el *Tribunal Electoral* al dictar sentencia el veintiocho de abril y once de mayo de dos mil dieciocho, en los medios de impugnación con clave SUP-RAP-047/2018⁵⁶ y SUP-RAP-137/2018⁵⁷, respectivamente, derivado de una falta de la misma naturaleza a la que aquí se estudia, en la que se determinó que el uso de datos personales poseía un carácter intrínseco o elemento esencial para la configuración de una afiliación indebida.

Ahora bien, más allá de la determinación de responsabilidad del partido político y, en el caso, de la consecuente imposición de sanción, esta autoridad debe tutelar el derecho fundamental de afiliación de los **catorce denunciantes**, es decir, estamos frente a la defensa de un derecho humano de naturaleza político-electoral, que en términos del artículo 1° de la Constitución Federal debe ser respetado, protegido y garantizado por todas las autoridades del Estado Mexicano.

⁵⁶ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/informacion_jurisdiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0047-2018.pdf

⁵⁷ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/informacion_jurisdiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0137-2018.pdf

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

Asimismo, para el caso de Luis Miguel Tzakum Ek, que presentó su renuncia al partido político, éste no demostró haber realizado el trámite respectivo para atender la solicitud de baja suscrita por dicho quejoso.

Además, debe tenerse en cuenta que si bien, en un primer momento consintió el uso de sus datos personales para ser afiliado, lo cierto es, que al momento que éste manifestó su intención de ser dado de baja de los registros de afiliados del denunciado, implicó que no se atendiera su oposición manifiesta del tratamiento que debía dársele a esos datos, lo que de suyo constituye también un uso indebido de datos personales.

Similar criterio utilizó este Consejo General al emitir las Resoluciones INE/CG444/2018 e INE/CG446/2018, que resolvieron los procedimientos ordinarios sancionadores UT/SCG/Q/JANC/CG/21/2017 e UT/SCG/Q/RGG/CG/66/2017.

Además, se debe precisar que la segunda de las resoluciones aludidas fue impugnada y confirmada por la *Sala Superior* al resolver expediente SUP-RAP-141/2018, en el que, entre otras cuestiones, determinó que ***sí se utilizaron los datos personales de un ciudadano de quien el partido político faltó a atender su derecho de desafiliación.***

Ahora bien, más allá de la determinación de responsabilidad o no al partido político y, en el caso, de la consecuente imposición de sanción, esta autoridad debe tutelar el derecho fundamental de afiliación de los quejosos, es decir, estamos frente a la defensa de un derecho humano de naturaleza político-electoral, que en términos del artículo 1° de la Constitución Federal debe ser respetado, protegido y garantizado por todas las autoridades del Estado Mexicano.

En tal sentido, se tiene que la voluntad de Juan Carlos Brito Noh, Celia Medina Moya, Cynthia Elena Almanza Vásquez, José Antonio Hernández García, José Eli Sánchez Silva, Jorge Octavio Solórzano Baylon, León Felipe Arrellano Luna, Rubén Juan de Dios Guerrero Chávez, María Guadalupe Cruz Martínez, Eunisenia Crisostomo Ángeles, Gerardo Tinajero Romero, Esperanza Hernández Casillas y Luis Miguel Tzakum Ek, partes **denunciantes** es no pertenecer a este partido político, se ordena al *PRI*, para que, en el supuesto que los quejosos continúen en

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

su padrón de afiliados, **sin mayor trámite**, cancele el registro de cada uno de ellos como sus militantes, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentaron sus escritos de renuncia o sus respectivas denuncias y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, las pruebas que amparen el cumplimiento.

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017, de cinco de enero de dos mil diecisiete, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el INE, que lo vincule con un instituto político en particular.

Por lo que hace a Jorge Luis Trujillo Lorena y Milton Ernesto Cruz Carpio, debe mencionarse que el *PRI*, mediante oficio PRI/REP-INE/0442/2018, informó que los ciudadanos en comento, fueron dados de baja del padrón de afiliados del partido político en cita, a través de las resoluciones emitidas por la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del estado de Chiapas, el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, circunstancia que fue corroborada por la *DEPPP*, al establecer que dichas personas cuentan con registro de cancelación al ente político de referencia, el nueve de marzo del año en curso.

CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de las faltas denunciadas, así como la responsabilidad por parte del partido político denunciado, en los casos detallados en el considerando que antecede, procede ahora determinar la sanción correspondiente, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 355, párrafo 5 del *COFIPE*, cuyo contenido se reproduce en el diverso 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, relativo a la gravedad de la responsabilidad en que se incurra; el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

de la falta; y, en su caso, la reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.

En relación con ello, el *Tribunal Electoral* ha sostenido que para individualizar la sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción electoral.

1. Calificación de la falta

A) Tipo de infracción

Partido	Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
<i>PRI</i>	La infracción se cometió por una acción del partido político denunciado al afiliar de forma indebida a catorce ciudadanos, así como por la omisión de no atender la solicitud de un ciudadano para desafiliarlo, con lo que se transgreden disposiciones de la <i>Constitución</i> y del <i>COFIPE</i> , en el momento de su comisión	La conducta fue la afiliación indebida (positiva y negativa) y el uso no autorizado de los datos personales de 15 ciudadanos por parte del <i>PRI</i> .	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la <i>Constitución</i> ; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2; 341, párrafo 1, inciso a), 342, párrafo 1, incisos a) y n) y 354, párrafo 1, inciso a), del <i>COFIPE</i> ; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la <i>LGIPE</i> ; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), t) y u) de la <i>LGPP</i> .

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o prohibidas.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

En el presente asunto, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el caso concreto, se acreditó que el *PRI* incluyó o mantuvo indebidamente en su padrón de afiliados, a quince ciudadanos, sin demostrar que para incorporarlos medió la voluntad de éstos de inscribirse y, para el caso de la renuncia, que dio el trámite correspondiente para realizar la desafiliación solicitada, violentando con ello lo establecido en los artículos 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; y 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e) del *COFIPE*; 443, párrafo 1, incisos a) y n); de la *LGIPE*, y 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *LGPP*.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de los ciudadanos mexicanos, de optar libremente por ser o no militantes de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, efectivamente consintieron libremente en ser agremiados a los distintos partidos políticos.

Por otra parte, como se analizó, para los casos en que no se demostró la voluntad de pertenecer como afiliados al *PRI*, así como en aquel en que no se dio el trámite correspondiente para atender la renuncia solicitada, se observa un uso indebido de datos personales, que a la postre debe ser sancionado por esta autoridad.

Lo anterior, ya que lógicamente se utilizaron datos personales como lo son, al menos el nombre y la clave de elector de cada uno de los ciudadanos para ser afiliados, lo cual ocurrió en contra de su voluntad, de ahí que el uso de sus datos personales se constituya como un elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida.

Para el caso del ciudadano que presentó su renuncia al partido político, debe tenerse en cuenta que si bien, en un primer momento consintió el uso de sus datos personales para ser afiliado, lo cierto es que al momento que éste manifestó su intención de ser dado de baja de los registros de afiliados del PRI, implicó que no se atendiera su oposición manifiesta del tratamiento que debía dársele a esos datos; es decir, de no aparecer en un padrón al cual no deseaba seguir incorporado, lo que de suyo constituye también un uso indebido de datos personales, toda vez que éstos fueron utilizados por el partido para acreditar ante la autoridad electoral un número mínimo de militantes para la conservación de su registro.

De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción correspondiente al *PRI*.

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que el *PRI* transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la normativa interna del partido político, y que, tal infracción se cometió en detrimento de los derechos de **quince** ciudadanos, esta situación no conlleva a estar en presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de afiliación y/o desafiliación al instituto político denunciado, quien incluyó en su padrón de militantes a los quejosos, sin demostrar el consentimiento previo para ello.

Caber precisar, que en apartados subsecuentes se analizará a detalle el impacto que tuvo dicha infracción, en atención al número de personas afiliadas indebidamente.

D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

a) Modo. En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles al *PRI*, consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *LGPP*, tanto en su aspecto positivo como negativo, al incluir en su padrón de afiliados a **quince ciudadanos**, sin tener la documentación soporte que acredite fehacientemente la voluntad de éstos de pertenecer o seguir perteneciendo a las filas del instituto político en el cual se encontraron incluidos, tal y como se advirtió a lo largo de la presente Resolución de forma pormenorizada.

b) Tiempo. En el caso concreto, como se razonó en el considerando que antecede, por cuanto hace a las afiliaciones sin el consentimiento previo de los ciudadanos, acontecieron en diversos momentos, mismos que se resumen en la tabla siguiente:

No.	Nombre	Información DEPPP	Información partido político
1	Jorge Luis Trujillo Lorena	Tiene registro cancelado. Se afilió 08/05/2013, se canceló 09/03/2018.	Se emitió declaratoria de renuncia 27/02/2018
2	Juan Carlos Brito Noh	Sí se encuentra afiliado 12/06/2014	No proporcionó información
3	Celia Medina Moya	Sí se encuentra afiliada 28/11/2014	No proporcionó información
4	Cynthia Elena Almanza Vásquez	Sí se encuentra afiliada 15/05/2014	No proporcionó información
5	José Antonio Hernández García	Sí se encuentra afiliado 30/03/2014	Sí se encuentra afiliado 30/03/2014
6	José Eli Sánchez Silva	Sí se encuentra afiliado	No proporcionó información
7	Jorge Octavio Solórzano Baylon	Sí se encuentra afiliado	No proporcionó información
8	Milton Ernesto Cruz Carpio	Tiene registro cancelado. Se afilió 07/03/2017, se canceló 09/03/2018.	Se emitió declaratoria de renuncia 27/02/2018
9	León Felipe Arrellano Luna	Sí se encuentra afiliado	No proporcionó información

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

No.	Nombre	Información DEPPP	Información partido político
10	Rubén Juan de Dios Guerrero Chávez	Sí se encuentra afiliado	No proporcionó información
11	María Guadalupe Cruz Martínez	Sí se encuentra afiliada 01/05/2015	No proporcionó información
12	Eunisenia Crisostomo Ángeles	Sí se encuentra afiliada 01/03/2018	No proporcionó información
13	Gerardo Tinajero Romero	Sí se encuentra afiliado	Sí se encuentra afiliado 24/03/2015
14	Esperanza Hernández Casillas	Sí se encuentra afiliada	Se emitió declaratoria de renuncia 01/03/2018
15	Luis Miguel Tzakum Ek	Sí se encuentra afiliado 28/08/2018	No proporcionó información

Cabe precisar que la temporalidad que se tomará en cuenta para efectos de la presente Resolución en los casos en los que no se cuenta con una fecha cierta de afiliación, será la correspondiente a la fecha de presentación de sus respectivas quejas, en tanto que es la única fecha cierta que consta en el expediente, lo anterior, tal y como se precisó en el Considerando SEGUNDO de esta Resolución intitulado *NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO*.

- c) **Lugar.** Con base a la información proporcionada por la *DEPPP*, se deduce que las faltas atribuidas a los partidos políticos se cometieron de la siguiente manera:

No.	Nombre	Entidad federativa
1	Jorge Luis Trujillo Lorena	Chiapas
2	Juan Carlos Brito Noh	Yucatán
3	Celia Medina Moya	Colima
4	Cynthia Elena Almanza Vásquez	Chihuahua
5	José Antonio Hernández García	Estado de México
6	José Eli Sánchez Silva	Michoacán
7	Jorge Octavio Solórzano Baylon	Chihuahua
8	Milton Ernesto Cruz Carpio	Chiapas

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

No.	Nombre	Entidad federativa
9	León Felipe Arrellano Luna	Puebla
10	Rubén Juan de Dios Guerrero Chávez	Chihuahua
11	María Guadalupe Cruz Martínez	Puebla
12	Eunisenia Crisostomo Ángeles	Michoacán
13	Gerardo Tinajero Romero	Michoacán
14	Esperanza Hernández Casillas	Michoacán
15	Luis Miguel Tzakum Ek	Yucatán

E. Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Se considera que en el caso existe una conducta **dolosa** por parte del *PRI*, en violación a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la Constitución Federal; 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *LGPP*.

La falta se califica como **dolosa**, por lo siguiente:

- El *PRI* es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus constitucional de **entidad de interés público**, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Federal; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- El *PRI* está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

democrático, respetando los derechos de los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la *LGPP*.

- El de libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
- La desafiliación a un partido político, es una modalidad del derecho fundamental de libre afiliación, por el cual un ciudadano elige libremente, en cualquier momento y sin restricción alguna de terceros, ya no pertenecer al mismo.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.
- Todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación o desafiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.
- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a) y e), de la *LGPP*.
- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano,

de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria.**

- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición (para el caso de solicitudes de desafiliación), en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, es una violación de orden constitucional y legal que **requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento.**

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta se considera dolosa, porque:

- 1) Catorce de los quejosos aluden que no solicitaron voluntariamente, en momento alguno, su registro o incorporación como militantes al *PRI*; sin que dicha afirmación fuera desvirtuada.
- 2) Uno de los denunciantes alude que, no obstante que presentó su renuncia a la militancia del *PRI*, dicho partido político no lo desafilió.
- 3) Quedó acreditado que los quejosos se encuentran en el padrón de militantes del *PRI*, conforme a lo informado por la *DEPPP*, quien precisó que, derivado del padrón de militantes capturado por ese instituto político, con corte al treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, a efecto de demostrar que contaba con el número mínimo de afiliados para la conservación de su registro.

- 4) El partido político denunciado no demostró con las pruebas idóneas, que las afiliaciones de los quejosos se hubieran realizado a través de los mecanismos legales y partidarios conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y voluntaria de los denunciantes.
- 5) El *PRI*, no eliminó de su padrón de afiliados a Luis Miguel Tzakum Ek, quien previamente presentó escrito de renuncia a la militancia de ese instituto político.
- 6) El partido denunciado no demostró ni probó que la afiliación y/o desafiliación, en su caso, fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun indiciaria, para estimar que la afiliación fue debida y apegada a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.

F. Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el *PRI*, se cometió al no desafiliar a un ciudadano, y al afiliar indebidamente a catorce personas, sin demostrar el acto volitivo de éstos, tanto de permanecer inscritos como de ingresar, en su padrón de militantes, así como de haber proporcionado sus datos personales para ese fin.

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en garantizar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, mediante la conservación de los documentos atinentes que permitan demostrar el acto de voluntad de los ciudadanos quejosos de militar en ese partido político, y de demostrar que sí realizó la baja de su padrón de aquel que, en el caso, presentó su respectiva renuncia o, en el supuesto, de demostrar la voluntad de estos de querer seguir perteneciendo a dicho instituto político.

2. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A) Reincidencia

Por cuanto a la **reincidencia** en que pudo haber incurrido el partido político, este organismo electoral autónomo considera que, en los casos de Milton Ernesto Cruz Carpio y María Guadalupe Cruz Martínez, **sí se actualiza dicha figura**, conforme a las razones que se exponen a continuación.

De conformidad con el artículo 355 párrafo 6 del *COFIPE*, cuyo contenido reproduce el diverso 458, párrafo 6 de la *LGIPE*, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el mencionado *Código*, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, la Sala Superior ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);
2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
3. Que en ejercicios anteriores el infractor **haya sido sancionado por esa infracción mediante Resolución o sentencia firme.**

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el *Tribunal Electoral*, a través de la Tesis de Jurisprudencia **41/2010**, de rubro **REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN**.⁵⁸

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con anterioridad.

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta.

Precisado lo anterior, debe decirse que, en los archivos de esta autoridad administrativa electoral, se encuentra la resolución INE/CG218/2015, aprobada por el Consejo General de este Instituto, el veintinueve de abril de dos mil quince, la cual fue emitida dentro del procedimiento sancionador ordinario identificado con la clave UT/SCG/Q/MCHA/CG/9/PEF/24/2015, a efecto de sancionar al *PRI*, por haber inscrito a su padrón de afiliados a una ciudadana sin su consentimiento.

De dicha circunstancia se advierte que, para el caso de María Guadalupe Cruz Martínez y Milton Ernesto Cruz Carpio, ciudadanos que conforme a la información proporcionada por la *DEPPP*, fueron afiliados al *PRI*, el uno de mayo de dos mil quince y el siete de marzo de dos mil diecisiete, respectivamente, se actualiza la figura jurídica de la reincidencia.

Ello es así, pues se tiene por acreditado que el *PRI* cometió la misma conducta con anterioridad, esto es, haber registrado en su padrón de afiliados a un ciudadano sin su consentimiento.

En tanto que, la infracción por la que se le sanciona al *PRI* en el presente asunto es de la misma naturaleza que aquella respecto de la que conoció esta autoridad en

⁵⁸ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010>

dos mil quince, puesto que en ambas se protege el mismo bien jurídico, como lo es el derecho de los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político.

Por otro lado, debe mencionarse que la resolución INE/CG218/2015, a través de la cual se castigó al partido político denunciado quedó firme al no ser controvertida por dicho instituto político.

En suma, se tiene que el *PRI* actualiza los supuestos mínimos de la reincidencia respecto al registro de María Guadalupe Cruz Martínez y Milton Ernesto Cruz Carpio, en su padrón de afiliados sin su consentimiento.

Ahora bien, por lo que hace al resto de los trece ciudadanos, cabe mencionar que la *DEPPP*, indicó que en siete de los casos que su afiliación se efectuó con anterioridad al dos mil quince, mientras que en seis supuestos, no contaba con el año de la afiliación, lo cual, tampoco fue informado por el partido político, por lo cual **no puede considerarse actualizada la reincidencia** en cuanto a estas personas, ya que su registro fue previo a la emisión de la resolución, y en otros casos, no se tiene certeza respecto a la fecha exacta de la comisión de la falta.

B. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de los ciudadanos al partido político, pues se comprobó que el *PRI* los afilió sin demostrar, contar con la documentación soporte correspondiente, que medió la voluntad de éstos de pertenecer a la lista de agremiados de dicho instituto político.
- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, incluso en su modalidad de desafiliación, de optar por ser o no militante de algún partido político, y la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.
- Para materializar la indebida afiliación de los denunciados, se utilizaron indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para formar el padrón de afiliados del *PRI*.
- No existió un beneficio por parte del partido denunciado, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral.
- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso Electoral.

- No existe reincidencia por parte del *PRI*.

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente **calificar la falta** en que incurrió el *PRI* como de **gravedad ordinaria**, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el partido denunciado dolosamente infringió el derecho de libre afiliación de los hoy quejosos, lo que constituye una violación al derecho fundamental de los ciudadanos reconocidos en la *Constitución*.

C. Sanción a imponer

Ahora bien, la mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción.

Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor entidad.⁵⁹

El artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIPE*, dispone el catálogo de sanciones a imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México; reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita; y en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la *Constitución* y de la *LGIPE*, con la cancelación de su registro como partido político.

⁵⁹ Véase la tesis XXVIII/2003 de la Sala Superior, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción (especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción acreditada), así como la conducta realizada por el *PRI* se determina que debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la *LGIPE*, confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realicen una falta similar.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que ni el *COFIPE*, ni la *LGIPE*, determinan pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo establecen las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

Asimismo, es importante tomar en cuenta el número de ciudadanos afiliados indebidamente al *PRI*, es decir, los **quince ciudadanos**, incluyendo aquel en su vertiente de falta de atención al derecho de desafiliación.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

Con base en lo anterior, este *Consejo General* estima que, derivado de las circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida al *PRI*, justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, el cual se encuentra replicado en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGIPE*, consistente en una **MULTA unitaria por cuanto hace a cada ciudadano sobre quienes se cometió la falta acreditada**, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto.

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la sanción a imponer.

En este orden de ideas, es pertinente hacer notar, que ha sido criterio de esta autoridad, en la resolución INE/CG120/2018, de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/ALC/CG/39/2017, así como en la resolución INE/CG/448/2018, de once de mayo de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2018, las cuales fueron confirmadas por el *Tribunal Electoral* al dictar sentencia el veintiocho de abril y once de mayo de dos mil dieciocho, en los medios de impugnación con

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

clave SUP-RAP-047/2018⁶⁰ y SUP-RAP-137/2018⁶¹, respectivamente, en los que se sancionó por una indebida afiliación de un ciudadano, en cada caso, con una multa equivalente a 642 (seiscientos cuarenta y dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento de la comisión de la conducta, sanción que se estima debe tomarse como base para el presente asunto, si se considera que en dichos asuntos se demostró la comisión de una infracción similar a la que acontece en los casos que aquí se resuelven.

En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta causa, en específico **que no se refiere a la interposición de una sola queja** —a diferencia de lo que aconteció en los precedentes citados—, **sino de una multiplicidad de quejas y afiliaciones indebidas, las cuales han quedado acreditadas en autos**, es claro que la individualización de la sanción aplicada con motivo de la afiliación indebida de los ciudadanos al partido político denunciado, debe resultar proporcional al número de ciudadanos en cuyo perjuicio se cometió la falta, sin perder de vista las condiciones socioeconómicas de cada instituto político, y no simplemente, los hechos denunciados y acreditados en el presente procedimiento, a fin de que la sanción que se imponga resulte efectivamente proporcional sin ser excesiva.

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad debe determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar de forma individual la multa que corresponda.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se

⁶⁰ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/informacion_jurisdiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0047-2018.pdf

⁶¹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/informacion_jurisdiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0137-2018.pdf

deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión que tiene sustento en la Tesis relevante **XXVIII/2003**,⁶² emitida por el *Tribunal Electoral*, misma que a letra establece:

SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.- *En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.*

En ese sentido, para efectos de la sanción a imponer, se considera oportuno diferenciar entre aquellos ciudadanos de los que se utilizaron indebidamente sus datos personales para afiliarlos sin su consentimiento al partido denunciado y aquella en la que se denunció la presunta indebida afiliación en su vertiente de falta de atención al derecho de desafiliación, puesto que, si bien en ambos casos estamos ante la presencia de una falta **grave ordinaria**, lo cierto es que en el primero de los supuestos hubieron hechos afirmativos tendentes a menoscabar el derecho de libre afiliación, utilizando datos personales de los afectados y en el

⁶² Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

segundo, se trata de una omisión, lo cual conlleva que la sanción imponer en cada supuesto sea diferenciada.

Ahora bien, a juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con base en lo dispuesto en la fracción II del numeral citado, lo procedente es imponer una **multa** equivalente a **trescientos veintiún** días de salario mínimo general para el Distrito Federal al *PRI*, **por el ciudadano de quien no se realizó su desafiliación correspondiente**, no obstante, la manifestación expresa de éste, en el sentido de no continuar en las filas de agremiados del denunciado.

Asimismo, se imponen **multas** equivalentes a **seiscientos cuarenta y dos** días de salario mínimo general para el Distrito Federal al *PRI*, **por cada uno de los catorce ciudadanos que se considera fueron afiliados indebidamente** y que aparecen en su padrón de afiliados.

Cabe precisar que iguales sanciones, han sido impuestas por este Consejo General, al emitir diversas resoluciones que han resuelto procedimientos ordinarios sancionadores por indebidas afiliaciones y, que además han sido confirmadas por la *Sala Superior*, como son: INE/CG444/2018, confirmada a través del **SUP-RAP-138/2018**; INE/CG448/2018, confirmada en el **SUP-RAP-137/2018**; INE/CG446/2018, confirmada a través del **SUP-RAP-141/2018**, e INE/CG537/2018, confirmada en el **SUP-RAP-170/2018**, entre otras.

Por otra parte, para los casos en los cuales se actualiza la reincidencia, se impondrá un cincuenta por ciento (50%) adicional de la sanción que resulte del monto total a imponer por cada caso en el que se llevó a cabo la afiliación de manera indebida, ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGIE*, que faculta a esta autoridad para que en el supuesto de que se acredite dicha figura jurídica, la conducta pueda ser sancionada hasta con el doble de la sanción a imponer.

En ese sentido, en virtud de que los ciudadanos denunciantes fueron afiliados en diferentes momentos, a fin de adoptar la postura más favorable para el partido político y reducir a la mínima expresión posible el carácter represor con que actúa el estado en los procedimientos de tipo sancionador, es que, para el cálculo de la

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

multa correspondiente, para el caso de **Jorge Luis Trujillo Lorena, Juan Carlos Brito Noh, Celia Medina Moya, Cynthia Elena Almanza Vásquez, José Antonio Hernández García, Milton Ernesto Cruz Carpio, María Guadalupe Cruz Martínez, Eunisenia Crisostomo Ángeles, Gerardo Tinajero Romero**, se debe tomar en cuenta el salario mínimo vigente al momento de realizar la afiliación y, obtenido el monto correspondiente, deberá hacerse la conversión a Unidades de Medida y Actualización.

Mientras que para el caso de **Luis Miguel Tzakum Ek**, se debe tomar en cuenta el salario mínimo vigente al momento en que solicitó su renuncia al *PRI* y, obtenido el monto correspondiente, deberá hacerse la conversión a Unidades de Medida y Actualización.

Por lo que hace a los supuestos de **José Eli Sánchez Silva, Jorge Octavio Solórzano Baylon, León Felipe Arrellano Luna, Rubén Juan de Dios Guerrero Chávez y Esperanza Hernández Casillas**, se aplicará directamente la Unidad de Medida y Actualización, vigente al momento en que presentaron su queja respectiva.

Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia **10/2018**, emitida por el Tribunal Electoral, de rubro ***MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.***⁶³

Al respecto, es un hecho notorio que se invoca en términos de lo establecido en el artículo 461 de la *LGIPE*, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fija anualmente los montos respectivos, mismos que al ser relacionados con las fechas de afiliación, para obtener la sanción que corresponde a cada partido político infractor, por cuanto a cada uno de los ciudadanos indebidamente afiliados, arrojan lo siguiente:

⁶³ Consultable en la [liga electrónica](http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=UNIDAD,DE,MEDIDA,DE,ACTUALIZACION)
<http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=UNIDAD,DE,MEDIDA,DE,ACTUALIZACION>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

PRI		
Total de quejosos	Salario mínimo / UMA	Sanción a imponer
Afiliación en 2013		
2	64.76	\$83,151.84
Afiliación en 2014		
4	67.29	\$172,800.72
Afiliación en 2015 (un caso de reincidencia)		
2	70.10	\$112,510.5
Afiliación en 2017 (un caso de reincidencia)		
1	75.49	\$72,696.87
Afiliación en 2018		
5	80.60	\$258,726.00
TOTAL		\$699,885.93 [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].

CIUDADANO QUE NO FUE DESAFILIADO		
Total de quejosos	Salario mínimo	Sanción a imponer
Solicitud de desafiliación en 2017		
1	\$75.49	\$24,232.29
TOTAL		\$24,232.29 [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, pues sin ser gravosa, sí puede inhibir al *PRI*, para que en el futuro vigile el cumplimiento de las normas de la materia.

Ahora bien, es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la *Constitución* —efectuada por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones.

En esas condiciones, para los casos de **Jorge Luis Trujillo Lorena, Juan Carlos Brito Noh, Celia Medina Moya, Cynthia Elena Almanza Vásquez, José Antonio Hernández García, Milton Ernesto Cruz Carpio, María Guadalupe Cruz Martínez, Eunisenia Crisostomo Ángeles, Gerardo Tinajero Romero y Luis**

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

Miguel Tzakum Ek, lo procedente es transformar la sanción que se considera idónea, expresada en salarios mínimos, a Unidades de Medida y Actualización, para lo cual es necesario dividir el monto inicial (seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México multiplicado por el salario mínimo vigente en 2013, 2014, 2015 y 2017, según corresponda), entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, misma que equivale, para el ejercicio fiscal en curso a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.), resultando las siguientes cantidades:

No	Ciudadano	Fecha de afiliación	Multa impuesta en SMGV	Valor SMGV	Valor UMA vigente	Sanción en UMAS (A*B)/C ⁶⁴	SANCIÓN A IMPONER (C*D) ⁶⁵
			A	B	C	D	
1	Jorge Luis Trujillo Lorena	08/05/2013	642	64.76	\$80.60	\$515.83	\$41,575.89
2	Juan Carlos Brito Noh	12/06/2014	642	67.29	\$80.60	\$535.98	\$43,199.98
3	Celia Medina Moya	28/11/2014	642	67.29	\$80.60	\$535.98	\$43,199.98
4	Cynthia Elena Almanza Vásquez	15/05/2014	642	67.29	\$80.60	\$535.98	\$43,199.98
5	José Antonio Hernández García	30/03/2014	642	67.29	\$80.60	\$535.98	\$43,199.98
6	Eunisenia Crisostomo Ángeles	01/03/2013	642	64.76	\$80.60	\$515.83	\$41,575.89
7	Gerardo Tinajero Romero	24/03/2015	642	70.10	\$80.60	\$558.36	\$45,003.81
8	Luis Miguel Tzakum Ek	28/08/2014	321	75.49	\$80.60	\$300.64	\$24,231.58
TOTAL						\$ 325,187.09	

No	Ciudadano	Fecha de afiliación	Multa impuesta en SMGV	Valor SMGV	Valor UMA vigente	Sanción en UMAS (A*B)/C ⁶⁶	SANCIÓN A IMPONER (C*D) ⁶⁷	Más 50% de la sanción a imponer por reincidencia	Sanción final
			A	B	C	D			
1	Milton Ernesto Cruz Carpio	07/03/2017	642	75.49	\$80.60	\$601.29	\$48,463.97	\$24,231.98	\$72,695.95

⁶⁴ Cifra al segundo decimal

⁶⁵ *Idem*

⁶⁶ Cifra al segundo decimal

⁶⁷ *Idem*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

No	Ciudadano	Fecha de afiliación	Multa impuesta en SMGV	Valor SMGV	Valor UMA vigente	Sanción en UMAS (A*B)/C ⁶⁶	SANCIÓN A IMPONER (C*D) ⁶⁷	Más 50% de la sanción a imponer por reincidencia	Sanción final
			A	B	C	D			
2	María Guadalupe Cruz Martínez	01/05/2015	642	70.10	\$80.60	\$558.36	\$45,003.81	\$22,501.90	\$67,505.71
TOTAL								\$140,201.66	

Finalmente, para los ciudadanos de quienes se impone la sanción con base en la Unidad de Medida de Actualización vigente en 2018, corresponden las siguientes cantidades:

No.	Ciudadano	Fecha de afiliación	Multa impuesta en UMA	Valor UMA	SANCIÓN A IMPONER
1	José Eli Sánchez Silva	09/febrero/2018	642	\$80.60	\$51,745. 2
2	Jorge Octavio Solórzano Baylon	09/febrero/2018	642	\$80.60	\$51,745. 2
3	León Felipe Arrellano Luna	19/febrero/2018	642	\$80.60	\$51,745. 2
4	Rubén Juan de Dios Guerrero Chávez	19/febrero/2018	642	\$80.60	\$51,745. 2
5	Esperanza Hernández Casillas	21/febrero/2018	642	\$80.60	\$51,745. 2
TOTAL				\$258,726	

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, pues sin ser gravosa, sí puede inhibir al *PRI*, para que en el futuro vigile el cumplimiento de las normas de la materia

D. El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la infracción

Se estima que la infracción cometida por parte del *PRI*, aun cuando causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de la infracción.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

E. Las condiciones socioeconómicas del infractor

Sobre este punto, es preciso señalar que conforme al Acuerdo INE/CG339/2017, emitido por este *Consejo General* el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se estableció que, entre otros, el *PRI* recibiría mensualmente en el presente ejercicio, por concepto de financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes, la siguiente cantidad:

SUJETO	Monto del financiamiento público para el sostenimiento de Actividades Ordinarias mensuales de 2018
<i>PRI</i>	\$91'241,389.00

Ahora bien, según fue informado por la *DEPPP*, a través del oficio **INE/DEPPP/DE/DPPF/5693/2018**, el monto de la ministración mensual correspondiente al mes de septiembre de dos mil dieciocho, debía ser ajustado en función de las sanciones administrativas pendientes de cubrir por dicho instituto político nacional, por lo cual la cifra total a recibir sería la siguiente:

SUJETO	IMPORTE DE LA MINISTRACIÓN DE MENSUAL DE 2018	IMPORTE TOTAL DE LAS SANCIONES SEPTIEMBRE 2018	IMPORTE DEL REINTEGRO DEL FINANCIAMIENTO LOCAL	IMPORTE NETO DE LA MINISTRACIÓN
<i>PRI</i>	\$91'241,389.00	\$45,620,694.00	\$0.00	\$45,620,695.00

F. Impacto en las actividades del sujeto infractor

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta al *PRI*, no es de carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida, respecto al monto del financiamiento que recibirá por concepto de actividades ordinarias permanentes en el mes de septiembre del año en curso, los siguientes porcentajes:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

Año	Monto de la sanción por ciudadano	Ciudadanos que fueron indebidamente afiliados	% de la ministración mensual por ciudadano⁶⁸
2013	\$41,575.89	2	0.09%
2014	\$43,199.98	4	0.09%
2015	\$45,003.81	1	0.09%
2015	\$67,505.71 (reincidencia)	1	0.14%
2017	\$72,695.95 (reincidencia)	1	0.15%
2017	\$24,231.58	1	0.05%
2018	\$51,745.2	5	0.11%

Por consiguiente, la sanción impuesta al *PRI* no es de carácter gravoso, si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual correspondiente al mes de septiembre de este año.

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción cometida por el *PRI* (especialmente los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con el financiamiento que recibe del *INE* para el mes de septiembre de dos mil dieciocho, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político sancionado.

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el partido político de mérito —tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagar sin que ello afecte sus operaciones ordinarias, además de que las sanciones son proporcionales a las faltas cometidas y se estima que, sin resultar excesivas ni ruinosas, pueden generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha

⁶⁸ Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

establecido la *Sala Superior* en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-250/2009,⁶⁹ es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

QUINTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE LOS QUEJOSOS COMO MILITANTES. En tal sentido, se tiene que la voluntad de los denunciantes es no pertenecer al *PRI*, por lo que se debe vincular al partido político, para que, de ser el caso, en el supuesto que los quejosos continúen en su padrón de militantes, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentó su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, los medios de prueba que amparen el cumplimiento.

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017⁷⁰, de cinco de enero de dos mil diecisiete, en donde se concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político a la *DEPPP*, a fin de que en el ámbito de sus atribuciones procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el *INE*; que lo vincule con un instituto político en particular.

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, amparado en el artículo 17 de la *Constitución*, se precisa que la presente determinación es impugnabile, tratándose de partidos políticos, a través del **recurso de apelación** previsto en el precepto 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como del **juicio para la protección de los datos personales de los ciudadanos** previsto en el artículo 79 del mismo ordenamiento, cuando se impugne por ciudadanos.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

⁶⁹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm>

⁷⁰ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/JDC/2/SUP_2017_JDC_2-626321.pdf

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara **fundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra del **Partido Revolucionario Institucional**, al infringir las disposiciones electorales del derecho de libre afiliación —tanto en su modalidad positiva como negativa— de **quince ciudadanos**, en términos de lo establecido en el Considerando **TERCERO** de esta Resolución.

SEGUNDO. En términos del Considerando **TERCERO** de la presente Resolución, se impone al **Partido Revolucionario Institucional**, una multa por la indebida **afiliación de cada uno** de los **ciudadanos** aludidos, conforme a los montos que se indican a continuación:

No.	Quejosa o quejoso	Sanción a imponer
1	Jorge Luis Trujillo Lorena	515.83 (quinientos quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$41,575.89 (Cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 89/100 M.N.) [ciudadano afiliado en 2013]
2	Juan Carlos Brito Noh	535.98 (quinientos treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.98 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M.N.) [ciudadano afiliado en 2014]
3	Celia Medina Moya	535.98 (quinientos treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.98 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M.N.) [ciudadana afiliada en 2014]

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

No.	Quejosa o quejoso	Sanción a imponer
4	Cynthia Elena Almanza Vásquez	535.98 (quinientos treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.98 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M.N.) [ciudadana afiliada en 2014]
5	José Antonio Hernández García	535.98 (quinientos treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.98 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M.N.) [ciudadano afiliado en 2014]
6	José Eli Sánchez Silva	642 (seiscientos cuarenta y dos) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a 51,745. 2 (cincuenta y un mil setecientos cuarenta y cinco pesos 02/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2018]
7	Jorge Octavio Solórzano Baylon	642 (seiscientos cuarenta y dos) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$51,745. 2 (cincuenta y un mil setecientos cuarenta y cinco pesos 02/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2018]
8	Milton Ernesto Cruz Carpio	601.29 (seiscientos uno punto veintinueve) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$48,463.97 (Cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 97/100 M.N.) , más \$24,231.98 (50% adicional por reincidencia) es igual a \$72,695.95 (setenta y dos mil seiscientos noventa y cinco pesos 95/100 M.N.) [ciudadano afiliado en 2017]
9	León Felipe Arrellano Luna	642 (seiscientos cuarenta y dos) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$51,745. 2 (cincuenta y un mil setecientos cuarenta y cinco pesos 02/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2018]
10	Rubén Juan de Dios Guerrero Chávez	642 (seiscientos cuarenta y dos) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$51,745. 2 (cincuenta y un mil setecientos cuarenta y cinco pesos 02/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2018]

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

No.	Quejosa o quejoso	Sanción a imponer
11	María Guadalupe Cruz Martínez	558.36 (quinientas cincuenta y ocho punto treinta y seis) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a 45,003.81 (cuarenta y cinco mil tres pesos 81/100 M.N.) más \$22,501.90 (50% adicional por reincidencia) es igual a \$67,505.71 (sesenta y siete mil quinientos cinco pesos 71/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2015]
12	Eunisenia Crisostomo Ángeles	515.83 (quinientos quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$41,575.89 (Cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 89/100 M.N.) [ciudadana afiliada en 2013]
13	Gerardo Tinajero Romero	558.36 (quinientas cincuenta y ocho punto treinta y seis) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a 45,003.81 (cuarenta y cinco mil tres pesos 81/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2015]
14	Esperanza Hernández Casillas	642 (seiscientos cuarenta y dos) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$51,745. 2 (cincuenta y un mil setecientos cuarenta y cinco pesos 02/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2018]
15	Luis Miguel Tzakum Ek	300.64 (trescientos punto sesenta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$24,231.58 (veinticuatro mil doscientos treinta y un pesos 58/100 M.N.) [ciudadano afiliado en 2014]

TERCERO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7 de la *LGIFE*, el monto de las multas impuestas **al PRI**, será deducido, según corresponda, de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dichos institutos políticos, una vez que esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su Considerando **SEXTO**.

CUARTO. Se vincula al *PRI* para que, de ser el caso, en el supuesto de que los quejosos continúen en su padrón de afiliados, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente resolución con efectos**, a partir de la fecha en que presentaron su escrito de denuncia y hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, a fin de que, en el

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JLTL/JD09/CHIS/61/2018

ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, las pruebas que amparen el cumplimiento, a fin de vigilar y corroborar el cumplimiento por parte del referido ente político, conforme a lo dispuesto en su Considerando **QUINTO**.

QUINTO. Se da vista al *PRI* a efecto de que en el ámbito de su competencia realice las investigaciones pertinentes e instaure los procedimientos que su normativa interna establezca y de ser el caso, finque las responsabilidades que correspondan, por afiliar indebidamente a catorce ciudadanos y por la omisión de desafiliar a un ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en el Considerando TERCERO.

SEXTO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como del juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano previsto en el artículo 79 del mismo ordenamiento.

Notifíquese personalmente a los siguientes ciudadanos:

No.	Ciudadano
1	Jorge Luis Trujillo Lorena
2	Juan Carlos Brito Noh
3	Celia Medina Moya
4	Cynthia Elena Almanza Vásquez
5	José Antonio Hernández García
6	José Eli Sánchez Silva
7	Jorge Octavio Solórzano Baylon
8	Milton Ernesto Cruz Carpio
9	León Felipe Arrellano Luna
10	Rubén Juan de Dios Guerrero Chávez
11	María Guadalupe Cruz Martínez
12	Eunisenia Crisostomo Ángeles
13	Gerardo Tinajero Romero
14	Esperanza Hernández Casillas
15	Luis Miguel Tzakum Ek

Así como al partido *PRI* por conducto de su respectivo representante ante este *Consejo General*; y por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1248/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO

EXPEDIENTE:

UT/SCG/Q/EZM/JD06/CHIS/142/2018

DENUNCIANTES: EDUARDO ZEPEDA MONZÓN
Y OTROS

DENUNCIADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/EZM/JD06/CHIS/142/2018, INICIADO CON MOTIVO DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR TRES PERSONAS, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN SU AFILIACIÓN INDEBIDA AL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y, EN SU CASO, EL USO NO AUTORIZADO DE SUS DATOS Y DOCUMENTOS PERSONALES

Ciudad de México, 12 de septiembre de dos mil dieciocho.

GLOSARIO	
<i>COFIPE</i>	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>Consejo General</i>	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
<i>Constitución</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<i>DEPPP</i>	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
<i>DERFE</i>	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral
<i>INE</i>	Instituto Nacional Electoral

GLOSARIO	
<i>LGIPE</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>LGPP</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>PAN</i>	Partido Acción Nacional
<i>Sala Superior</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>Tribunal Electoral</i>	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

A N T E C E D E N T E

Como se refirió anteriormente, el presente procedimiento deriva de quejas presentadas por tres personas, quienes hicieron del conocimiento de esta autoridad hechos presuntamente contraventores de la normatividad electoral, consistente en la presunta afiliación indebida de Jessica Samantha Hernández Arroyo, porque no medió consentimiento para ello ni para el uso de sus datos personales, así como la presunta violación al derecho a la libre afiliación en su vertiente de no permitir a Eduardo Zepeda Monzón y Miguel Ángel Delgado Colín ser desafiliados y el uso indebido de datos personales para ese fin, atribuible al *PAN*.

No.	Nombre del quejoso	Fecha escrito de queja
1	Jessica Samantha Hernández	02 de mayo de 2018
2	Eduardo Zepeda Monzón	03 de abril de 2018
3	Miguel Ángel Delgado Colín	14 de mayo de 2018

R E S U L T A N D O

I. Registro, admisión y reserva de emplazamiento.¹ El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral instruyó el

¹ Visible a páginas 17 a 24 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/EZM/JD06/CHIS/142/2018

registro del procedimiento sancionador ordinario, al cual se le asignó la clave **UT/SCG/Q/EZM/JD06/CHIS/142/2018**, por la presunta afiliación indebida y el uso indebido de datos personales por parte del *PAN*.

En el acuerdo en cita, se admitió a trámite el procedimiento de sanción señalado con anterioridad y se reservó lo relativo al emplazamiento de las partes; asimismo, se ordenó la realización de diversas diligencias de investigación.

Finalmente, se ordenó la notificación de dicho acuerdo de admisión al *PAN*, así como a los tres denunciados.

II. Diligencia de investigación. Con el objeto de proveer lo conducente y para la debida integración del presente asunto, la autoridad instructora determinó requerir, a los sujetos que se indican a continuación:

Acuerdo de 21 de mayo de 2018 ²		
Sujeto	Oficio-notificación	Oficio-Fecha de respuesta
<i>PAN</i>	INE-UT/7875/2018 24 de mayo de 2018. ³	RPAN-0320/2018 ⁴ 30 de mayo de 2018
<i>DEPPP</i>	INE-UT/7876/2018 24 de mayo de 2018. ⁵	Correo electrónico ⁶ 25 de mayo de 2018

III. Emplazamiento.⁷ El veinte de junio de dos mil dieciocho, se ordenó el emplazamiento al *PAN*, para el efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a las conductas que se le imputan y aportara los medios de prueba que considerara pertinentes.

Cabe señalar, que para tal efecto se les corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito.

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

² Visible a páginas 17 a 24 del expediente.

³ Visible a página 31 del expediente.

⁴ Visible a páginas 37 a 39 y anexos a páginas 40 a 49 del expediente.

⁵ Visible a página 33 del expediente.

⁶ Visible a páginas 34 a 35 del expediente.

⁷ Visible a páginas 72 a 79 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/EZM/JD06/CHIS/142/2018

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Oficio- Fecha de respuesta
PAN INE-UT/9948/2018 ⁸	Citatorio: ⁹ 21 de junio de 2018. Cédula: ¹⁰ 22 de junio de 2018. Plazo: 25 al 29 de junio de 2018.	RPAN-0502/2018 ¹¹ 29 de junio de 2018

IV. Alegatos.¹² Mediante acuerdo de cuatro de julio de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a las partes, a efecto de que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera.

El acuerdo de vista para alegatos, se diligenció en los siguientes términos:

Denunciado

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
PAN INE-UT/11307/2018 ¹³ 10/07/2018	Citatorio: ¹⁴ 9 de julio de 2018. Cédula: ¹⁵ 10 de julio de 2018. Plazo: Del 11 al 17 de julio de 2017	Oficio RPAN-0582/2018 signado por el representante propietario del PAN ante el <i>Consejo General.</i> ¹⁶

Denunciantes

No	Quejosos – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
1	Jessica Samantha Hernández Arroyo INE/JDE03/VS/1829/18 ¹⁷	Cédula: ¹⁸ 20 de julio de 2018. Plazo: 23 de julio al 27 de julio de 2018.	26/07/2018 ¹⁹
2	Eduardo Zepeda Monzón INE/06JDE/CHIS/VS/364/2018 ²⁰	Cédula: Notificación por comparecencia. ²¹ Plazo: 25 de julio al 31 de julio de 2018.	Sin respuesta

⁸ Visible a página 85 del expediente.

⁹ Visible a páginas 86 a 89 del expediente.

¹⁰ Visible a páginas 90 a 91 del expediente.

¹¹ Visible a páginas 95 a 97 y anexos a páginas 98 a 107 del expediente.

¹² Visible a páginas 108 a 111 del expediente.

¹³ Visible a página 115 del expediente.

¹⁴ Visible a páginas 116 a 118 del expediente.

¹⁵ Visible a páginas 119 a 120 del expediente.

¹⁶ Visible a páginas 125 a 129 del expediente.

¹⁷ Visible a página 132 del expediente.

¹⁸ Visible a páginas 133-134 del expediente.

¹⁹ Visible a páginas 176-178 del expediente

²⁰ Visible a página 147 del expediente.

²¹ Visible a páginas 145-146 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/EZM/JD06/CHIS/142/2018

No	Quejosos – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
3	Miguel Ángel Delgado Colín INE/JD04/1439/2018 ²²	Cédula: 20 de julio de 2018. ²³ Plazo: 23 de julio al 27 de julio de 2018	Sin respuesta

Es importante precisar que el *PAN* no proporcionó documentación para acreditar la debida afiliación de la quejosa o, en su caso, que procedió a dar de baja de su padrón de afiliados a los denunciantes, solamente se dio a la tarea de dar contestación a los requerimientos de información que le fueron formulados, por lo cual la autoridad instructora determinó en el acuerdo de alegatos correr traslado con el oficio de respuesta atinente a cada uno de ellos.

V. Diligencia. Mediante acuerdo de seis agosto de dos mil dieciocho,²⁴ se determinó requerir a la *DEPPP*, mayor información sobre la cancelación del registro de los denunciantes como militantes del *PAN*, lo cual fue desahogado conforme a lo siguiente:

Sujeto	Oficio-Fecha de notificación	Oficio-Fecha de respuesta
<i>DEPPP</i>	INE-UT/12431/2018 ²⁵ 07 de agosto de 2018	Correo electrónico de 09 de agosto de 2018 ²⁶

VI. Elaboración de proyecto. En su oportunidad, toda vez que no había diligencias pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la Comisión de Quejas y Denuncias.

VII. Sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias. En la Octogésima Cuarta Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el seis de septiembre de dos mil dieciocho, la *Comisión* resolvió el presente proyecto, en lo general por unanimidad de votos de sus integrantes, y en lo particular, por mayoría de dos votos de la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela Herrera y del Consejero Electoral Benito Nacif Hernández, con el voto en contra de la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala Pérez, por cuanto a la individualización de la sanción, y

²² Visible a página 141 del expediente.

²³ Visible a páginas 138-139 del expediente.

²⁴ Visible a páginas 1542-1546 del expediente.

²⁵ Visible a página 162 del expediente.

²⁶ Visible a páginas 163-164 del expediente.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión de Quejas y Denuncias, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte del *PAN*, en perjuicio de los denunciantes que han sido señalados a lo largo de la presente determinación.

Ahora bien, conforme al artículo 23 del *COFIPE*, los partidos políticos ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en el citado Código, correspondiendo al Instituto Federal Electoral —hoy INE— vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n); y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho Código, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38 del dispositivo legal en cita, las cuales son sancionables por el Consejo General.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/EZM/JD06/CHIS/142/2018

Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443 párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la *LGIPE* y 25 de la *LGPP*, respectivamente.

En consecuencia, siendo atribución del *Consejo General* conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta competente para conocer y resolver respecto de las presuntas infracciones denunciadas en el procedimiento sancionador ordinario, atribuidas al *PAN*, derivado, esencialmente, de la afiliación indebida al citado instituto político de una ciudadana y la negativa de este, de desafiliar a dos ciudadanos.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,²⁷ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de ciudadanos.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIPE* —los cuales contienen reglas que ya se

²⁷ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

encontraban previstas en el COFIPE, en los artículos 342, párrafo 1, incisos a); 356, 361, 364, 365 y 366—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO

En el presente asunto se debe subrayar que las presuntas faltas (afiliación indebida) se cometieron **durante la vigencia del COFIPE**, puesto que en el caso de Jessica Samantha Hernández Arroyo, el registro o afiliación de la quejosa al **PAN** se realizó antes del treinta y uno de marzo de dos mil catorce, fecha en la cual se encontraba vigente dicho código.

En efecto, de conformidad con lo establecido en el Punto cuarto de los Lineamientos para la Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su registro, aprobados por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG617/2012, de treinta de agosto de dos mil doce, los Partidos Políticos Nacionales debían capturar en el *Sistema de Cómputo desarrollado por la Unidad Técnica de Servicios de Informática*, los datos de todos sus afiliados en el periodo comprendido **entre el uno de abril de dos mil trece y el treinta y uno de marzo de dos mil catorce**, siendo que precisamente el registro de Samantha Hernández Arroyo, corresponde a ese periodo.

Por tanto, si al momento de la comisión de las presuntas faltas se encontraba vigente el COFIPE,²⁸ es claro que este ordenamiento legal debe aplicarse para las cuestiones sustantivas del presente procedimiento, al margen que las faltas pudieran haber sido advertidas por los quejosos y cuestionadas mediante las quejas que dieron origen al presente asunto, una vez que dicha norma fue abrogada por la LGIPE, así como que este último ordenamiento sea fundamento para cuestiones procesales o adjetivas.

²⁸ El COFIPE estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce.

No obstante, para los casos correspondientes a Eduardo Zepeda Monzón y Miguel Ángel Delgado Colín, la normatividad aplicable será la *LGIFE*, toda vez que la supuesta omisión a darlos de baja aconteció durante la vigencia de este cuerpo normativo.

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO

1. LITIS

En el presente asunto se deberá determinar si el *PAN* afilió indebidamente o no a la ciudadana que alega no haber dado su consentimiento para estar en sus filas, y si violó el derecho de libertad de afiliación en su vertiente de no permitir o dar curso a las solicitudes de desafiliación presentadas por ciudadanos que alegan que el partido fue omiso en dar trámite a sus escritos de renuncia, haciendo para ello uso ilegítimo de su información personal, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIFE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*.

2. MARCO NORMATIVO

A) Constitución, tratados internacionales y ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

“Artículo 6

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

...

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.”

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la *Constitución*, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33, de la *Constitución*.

Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los

partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 24/2002,²⁹ emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES**.

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación* de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,³⁰ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano,

²⁹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

³⁰ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación* de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace

más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes — asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

“Artículo 23. Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:

...

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.”

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que, en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;
- Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);

- Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGPE*, que es obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su constitución y registro.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/EZM/JD06/CHIS/142/2018

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.
- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que, en

caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta su libertad de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la *Constitución* y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna del PAN

Como se ha mencionado anteriormente, la obligación de los partidos políticos de garantizar el derecho de libre afiliación de sus agremiados, deviene de las propias disposiciones constitucionales, legales y convencionales a que se ha hecho referencia párrafos arriba, por tanto, su cumplimiento, en modo alguno, se encuentra sujeto a las disposiciones internas que cada instituto tiene en su haber normativo.

No obstante, a efecto de tener claridad acerca del proceso que un ciudadano debe llevar a cabo para convertirse en militante del partido político ahora denunciado, se

hace necesario analizar la norma interna del *PAN*, para lo cual, enseguida se transcribe la parte conducente de sus Estatutos, en los términos siguientes:³¹

Estatuto del PAN

“Artículo 8

1. Son militantes del Partido Acción Nacional, los ciudadanos mexicanos que, de forma directa, personal, presencial, **individual, libre**, pacífica y voluntaria, **manifiesten su deseo de afiliarse**, asuman como propios los principios, fines, objetivos y documentos básicos del Partido Acción Nacional, y sean aceptados con tal carácter.

...

Artículo 9

1. El procedimiento de afiliación se regirá conforme a lo previsto en el Reglamento correspondiente. La solicitud **se presentará por escrito y podrá realizarse ante cualquier Comité del Partido de la entidad federativa correspondiente**, independientemente donde se encuentre su domicilio. Los mexicanos residentes en el extranjero, se podrán afiliar fuera del territorio nacional.

...

Artículo 10

1. Para ser militante, se requiere cumplir con los siguientes **requisitos**:

- a)** Ser ciudadano mexicano;
- b)** Tener un modo honesto de vivir;
- c)** Haber participado en la capacitación coordinada o avalada por el área correspondiente del Comité Ejecutivo Nacional;
- d) Suscribir el formato aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional**, acompañando copia de su credencial para votar con fotografía vigente, emitida por el Instituto Nacional Electoral; en el caso de mexicanos que residan en el extranjero, podrán acompañar copia de la matrícula consular.”

³¹ Consultados en el enlace electrónico <http://www.pan.org.mx/wp-content/uploads/2016/11/ESTATUTOS-GENERALES-VIGENTES-DOF-26092017.pdf>, el doce de abril de dos mil dieciocho.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/EZM/JD06/CHIS/142/2018

Reglamento de Militantes del Partido Acción Nacional³²

“Artículo 1. El presente ordenamiento es reglamentario de lo dispuesto en los artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 33 BIS numeral 1 fracciones I y II, 41, 49 y 128 numeral 2 de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, aprobados por la XVII Asamblea Nacional Extraordinaria.

Artículo 2. El presente Reglamento norma lo siguiente:

I. El procedimiento de afiliación, para el mantenimiento de la calidad de militante a fin de poder ejercer derechos; el procedimiento de actualización de datos; el procedimiento de aclaración y verificación de actividades; y el procedimiento de declaratoria de baja
...

Artículo 8. Toda ciudadana o ciudadano mexicano que desee afiliarse como militante al Partido, deberá hacerlo de forma individual, libre, pacífica, voluntaria, directa, presencial y personal; asumir como propios los Principios de Doctrina, fines y objetivos; así como los Programas de Acción Política, Plataformas políticas y electorales, Estatutos y Reglamentos.

Artículo 9. La militancia en el Partido inicia a partir de la aceptación por el Registro Nacional de Militantes, el que verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos por los Estatutos. Una vez aceptado, la fecha de inicio de la militancia será a partir de que la instancia competente hubiere recibido la solicitud de afiliación.
...

Artículo 12. Toda ciudadana o ciudadano mexicano que desee afiliarse al Partido en los términos del Estatuto y el presente Reglamento, se sujetará al procedimiento siguiente:

I. Llenará el formato electrónico de inscripción en el portal del Registro Nacional de Militantes. La inscripción generará un folio que será utilizado por el militante para la inscripción en el Taller de Introducción al Partido;

II. Realizado el curso, reingresará al portal del Registro Nacional de Militantes para generar el formato de solicitud de afiliación, para lo cual deberá acudir de manera presencial y personal a cualquier Comité Directivo Municipal del Estado a que corresponda, o Comité Directivo Delegacional en el caso del Distrito Federal; o incluso a la respectiva sede del Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal;

³² Consultable en la página de internet del PAN, o bien en la dirección electrónica: <http://actores-politicos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/nacionales/documentos-basicos/#!/pan>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/EZM/JD06/CHIS/142/2018

III. El formato de solicitud de afiliación deberá acompañarse, al momento de la entrega, con fotocopias de los siguientes documentos, presentando los originales para cotejo:

a) Credencial para votar con fotografía vigente, expedida por la autoridad electoral nacional, para el efecto de acreditar la ciudadanía. Si dicha credencial no contiene el domicilio, el solicitante deberá anexar adicionalmente la copia de un comprobante de agua, luz, teléfono o gas, con una antigüedad no mayor a 4 meses, así como el original para cotejo; y

b) En su caso, copia de la renuncia a cualquier otro Partido Político en el que haya militado, presentada por lo menos seis meses antes de la fecha de solicitud de afiliación al Partido.

IV. El Comité Directivo receptor, a través de su Director de Afiliación, imprimirá la solicitud de afiliación y adjuntará en la PLATAFORMA PAN, la fotografía del solicitante, con los parámetros establecidos por el Registro Nacional de Militantes;

V. El órgano del Partido receptor de los documentos descritos en la fracción III, registrará y digitalizará, en la PLATAFORMA PAN, los datos contenidos en la solicitud del ciudadano, en un término máximo de 15 días naturales.

Los Directores de afiliación acreditados ante el Padrón Nacional de Estructuras, estarán facultados para hacer entrega personal o por correo certificado o mensajería especializada a la instancia correspondiente, de las solicitudes de afiliación que reciban, en un término máximo de 15 días naturales a partir de dicha recepción.

En el caso de que las estructuras municipales correspondientes no cuenten con los medios tecnológicos para llevar a cabo el procedimiento de adjuntar la documentación en la PLATAFORMA PAN, con independencia del registro de los datos del solicitante, remitirán la documentación al Director de Afiliación del Comité Directivo Estatal, dentro de los 10 días naturales a partir de que reciban las solicitudes de afiliación para su trámite conducente. Pasado este periodo, el solicitante deberá acudir al Comité Directivo Municipal receptor a efecto de obtener el comprobante impreso de su solicitud de afiliación; y

VI. El Director de afiliación receptor: recibirá, sellará y asentará su firma en el lugar establecido de la solicitud de afiliación, en caso de que se cumpla con los requisitos establecidos en el presente artículo; en caso contrario, prevendrá al solicitante y registrará, en la PLATAFORMA PAN, sus datos, así como la fecha y el motivo de la prevención.”

De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente:

- El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, fundamentalmente, en la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para decidir **libre e individualmente** si desean formar parte de los partidos y agrupaciones políticas.
- Afiliado o militante es el ciudadano que libre, voluntaria e individualmente, acude a un partido político para solicitar su incorporación al padrón de militantes respectivo, a través de los documentos aprobados por los órganos partidistas correspondientes.
- Al *PAN* podrán afiliarse los ciudadanos que, libre e individualmente, expresen su voluntad de integrarse al partido.
- Para obtener la afiliación al partido de referencia, se requiere, además de ser ciudadano mexicano y expresar **su voluntad libre, individual y pacífica de afiliarse** al Partido, **suscribir personalmente** la solicitud de alta como militante.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán contemplar en sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos.

D) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la *Constitución*, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

3. CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE VIOLACIÓN AL DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militantes del *PAN*, por regla general debe acudir a las instancias partidistas competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso del *PAN*), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del *COFIPE*, precepto que, derivado de la reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la *LGPP*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a

respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que además los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la *Constitución*, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y voluntaria.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.

- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la *Sala Superior*, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**,³³ donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia 21/2013, de rubro **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,³⁴ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria³⁵ y como estándar probatorio.³⁶

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

³³ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

³⁴ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.

³⁵ Tesis de Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

³⁶ Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. Véase la nota 35.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación³⁷ ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la *Sala Superior* consideró en la sentencia referida, que, para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con fundamento en el diverso 441 de la *LG/PE*, lo que implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

³⁷ Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA**, **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO**.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento ordinario sancionador una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento

que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberadamente la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

4. HECHOS ACREDITADOS Y PRECISIONES

Como se ha mencionado, las denuncias presentadas por los quejosos, versan sobre la supuesta violación a su derecho de libertad de afiliación, tanto en la modalidad de afiliación indebida de los ciudadanos como de no permitirles ser desafiliados del *PAN*, así como la utilización de sus datos personales por dicho partido político.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/EZM/JD06/CHIS/142/2018

Ahora bien, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de la infracción denunciada, en los siguientes cuadros se resumirá, por cada uno de los denunciantes, la información derivada de la investigación preliminar implementada, así como las conclusiones que, en cada caso, fueron advertidas:

No	Ciudadano	Escrito del de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP ³⁸	Manifestaciones del Partido Político
1	Jessica Samantha Hernández Arroyo	2 de mayo de 2018 ³⁹ La ciudadana manifestó que el 24 de abril de 2018, realizó una compulsa con la base de datos de afiliados de partidos políticos, resultando estar afiliada al <i>PAN</i> de manera indebida.	Afiliado 25/05/2011	Escrito ⁴⁰ Informó que la ciudadana está dada de baja de su padrón de militantes desde el 24/07/2014.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante está afiliada al <i>PAN</i>. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Al dar contestación a la vista para formular alegatos,⁴¹ la ciudadana reiteró su inconformidad por la afiliación indebida que el <i>PAN</i> llevó a cabo.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de Renuncia	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
2	Miguel Ángel Delgado Colín	14 de mayo de 2018 ⁴² El ciudadano manifestó que en el 27 de agosto de 2014 presentó escrito de renuncia a la militancia al <i>PAN</i> . Anexó	Registro cancelado el 03/07/2018 con fecha de	Escrito ⁴⁵ Informó que el ciudadano está dada de baja de su padrón de militantes desde el 13/10/2014.

³⁸ Correo electrónico de 25 de mayo de 2018. Visible a páginas 34-35 del expediente.

³⁹ Visible a páginas 10-11 y anexos a páginas 12-13 del expediente.

⁴⁰ Visible a páginas 37-39 del expediente.

⁴¹ Visible a páginas 150-151 del expediente.

⁴² Visible a páginas 14 y anexos a páginas 15-16 del expediente.

⁴⁵ Visible a páginas 37-39 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/EZM/JD06/CHIS/142/2018

No	Ciudadano	Escrito de Renuncia	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
		copia simple de acuse de recibo de escrito de 27 de agosto de 2014, con asunto <i>RENUNCIA</i> .	baja 05/11/2014 ⁴³ Afiliado 24/06/2014 ⁴⁴	
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente en el apartado denominado CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE VIOLACIÓN AL DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO, no existe controversia en el sentido de que el afectado fue militante del <i>PAN</i>.</p> <p>El quejoso aportó copia simple de acuse del escrito de renuncia a la militancia al <i>PAN</i>, fechado el 27 de agosto de 2014, signado por Miguel Ángel Delgado Colín, dirigido a la Presidenta del Comité Directivo Estatal MORELOS del instituto político denunciado, con sello de recibido en esa fecha. Esto es, el denunciante manifestó que presentó escrito de renuncia a su militancia en el año dos mil catorce, a dicho instituto político.</p> <p>El <i>PAN</i> manifestó que el 13 de octubre de 2014, procedió a dar de baja el registro del quejoso de su padrón de militantes.</p> <p>No obstante, al 25 de mayo de 2018, de conformidad con la información proporcionada por la DEPPP, éste seguía apareciendo como registro válido en el padrón de militantes del partido en cita.</p> <p>Al respecto, es importante referir que, si bien el 09 de agosto de 2018 la <i>DEPPP</i> informó que el <i>PAN</i> realizó en el sistema de cómputo la cancelación del registro del ciudadano como su militante, ingresando como fecha de baja el 05 de noviembre de 2014, lo cierto es que tal movimiento se efectuó el 03 de julio de 2018.</p> <p>Esto es, tal y como lo refiere la <i>DEPPP</i>, <u>las fechas de afiliación y las de baja fueron capturadas por el partido político</u>, es decir el <i>PAN</i> realizó el 03 de julio de 2018 el movimiento de cancelación de registro del ciudadano quejoso, precisando como fecha de desafiliación el 05 de noviembre de 2014, fecha que, para efectos de la presente determinación, no se tiene como válida.</p> <p>Lo anterior, ya que, como se indicó, el instituto político, por lo menos al 03 de julio de 2018, fecha en que llevó a cabo el multicitado movimiento, mantuvo registrado como su afiliado al quejoso.</p> <p>Por tanto, es de concluirse que se está en presencia de una violación al derecho de libre afiliación en perjuicio del denunciante, en su modalidad de no hacerle efectivo su derecho de desafiliación; toda vez que contrario a la voluntad de la persona de no pertenecer como militante del ente político, el partido lo mantuvo dentro de sus registros de agremiados.</p> <p>En consecuencia, la conclusión debe ser que Sí se actualiza una violación al derecho a la libre afiliación en su vertiente de no permitir a un ciudadano ser desafiliado.</p>				

⁴³ Correo electrónico de 09 de agosto de mayo de 2018. Visible a páginas 163-164 del expediente.

⁴⁴ Correo electrónico de 25 de mayo de 2018. Visible a páginas 34-35 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/EZM/JD06/CHIS/142/2018

No	Ciudadano	Escrito de Renuncia	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
3	Eduardo Zepeda Monzón	03 de abril de 2018 ⁴⁶ El ciudadano manifestó que en el 08 de marzo de 2018. presentó escrito de renuncia a la militancia al <i>PAN</i> . Anexó acuse original de escrito de 08 de marzo de 2018.	Registro cancelado el 03/07/2018 con fecha de baja 15/11/2017 ⁴⁷ Afiliado 31/01/2014 ⁴⁸	Escrito ⁴⁹ Informó que el ciudadano está dada de baja de su padrón de militantes desde el 15/11/2017.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente en el apartado denominado CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE VIOLACIÓN AL DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO, no existe controversia en el sentido de que el afectado fue militante del <i>PAN</i>.</p> <p>El quejoso aportó acuse original de escrito de renuncia a la militancia al <i>PAN</i>, fechado el 08 de marzo de 2018, signado por Eduardo Zepeda Monzón, dirigido al instituto político denunciado, con sello de recibido en esa fecha por el Comité Directivo Estatal en Chiapas. Esto es, el denunciante manifestó que presentó escrito de renuncia a su militancia en marzo de dos mil dieciocho, a dicho instituto político.</p> <p>El <i>PAN</i> manifestó que el 15 de noviembre de 2017, procedió a dar de baja el registro del quejoso de su padrón de militantes.</p> <p>No obstante, al 25 de mayo de 2018, de conformidad con la información proporcionada por la DEPPP, éste seguía apareciendo como registro válido en el padrón de militantes del partido in cita.</p> <p>Al respecto, es importante referir que, si bien el 09 de agosto de 2018 la <i>DEPPP</i> informó que el <i>PAN</i> realizó en el sistema de cómputo la cancelación del registro del ciudadano como su militante, ingresando como fecha de baja el 15 de noviembre de 2017, lo cierto es que tal movimiento se efectuó el 03 de julio de 2018.</p> <p>Esto es, tal y como lo refiere la <i>DEPPP</i>, las fechas de afiliación y las de baja fueron capturadas por el partido político, es decir el <i>PAN</i> realizó el 03 de julio de 2018 el movimiento de cancelación de registro del ciudadano quejoso, precisando como fecha de desafiliación el 15 de noviembre de 2017, fecha que, para efectos de la presente determinación, no se tiene como válida.</p> <p>Lo anterior, ya que, como se indicó, el instituto político, por lo menos al 03 de julio de 2018, fecha en que llevó a cabo el multicitado movimiento, mantuvo registrado como su afiliado al quejoso.</p>				

⁴⁶ Visible a páginas 2 y anexos a páginas 4-6 del expediente.

⁴⁷ Correo electrónico de 09 de agosto de mayo de 2018. Visible a páginas 163-164 del expediente.

⁴⁸ Correo electrónico de 25 de mayo de 2018. Visible a páginas 34-35 del expediente.

⁴⁹ Visible a páginas 37-39 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/EZM/JD06/CHIS/142/2018

No	Ciudadano	Escrito de Renuncia	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
<p>Por tanto, es de concluirse que se está en presencia de una violación al derecho de libre afiliación en perjuicio del denunciante, en su modalidad de no hacerle efectivo su derecho de desafiliación; toda vez que contrario a la voluntad de la persona de no pertenecer como militante del ente político, el partido lo mantuvo dentro de sus registros de agremiados.</p> <p>En consecuencia, la conclusión debe ser que Sí se actualiza una violación al derecho a la libre afiliación en su vertiente de no permitir a un ciudadano ser desafiliado.</p>				

Las constancias aportadas por la *DEPPP*, al ser documentos generados en ejercicio de sus atribuciones se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del Reglamento de Quejas y Denuncias del *INE*, mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la *LGIPE* y 27, párrafo 2 del Reglamento citado tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran controvertidas ni desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

En el mismo tenor, las documentales allegadas al expediente por el partido político denunciado, así como por los denunciantes, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracción II del Reglamento de Quejas y Denuncias del *INE*; por lo que, por sí mismas, carecen de valor probatorio pleno, y sólo alcanzarán ese grado cuando, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, generen convicción en este *Consejo General* sobre la veracidad de los hechos a que se refieren, ello al tenor de lo preceptuado en los artículos 462, párrafo 3 de la *LGIPE*, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención.

5. CASO CONCRETO

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por los quejosos, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5, del *COFIPE*, cuyo contenido se replica en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; esto es, partido político, candidato o inclusive cualquier persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

En tal sentido, por cuanto hace a la existencia del supuesto normativo, debe reiterarse, como se estableció en apartados previos, que desde hace décadas está reconocido en la legislación de este país, la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, y de igual manera, que las personas en este país tienen el derecho de que se proteja su información privada y sus datos personales, todo lo cual está previsto desde el nivel constitucional.

En el caso, si bien en el marco normativo se hace referencia a los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, identificados con el número de resolución CG617/2012 y, de igual manera se transcribe la parte de disposiciones estatutarias del partido político denunciado, relacionada con el procedimiento de afiliación, lo cierto es que, por el carácter constitucional de tales derechos, la existencia de los mismos —y las obligaciones correlativas a éstos—, no está condicionada al reconocimiento por parte de los sujetos obligados, en este caso, de los partidos políticos.

En otras palabras, si la libre afiliación a los institutos políticos es un derecho de los ciudadanos de este país desde hace varios decenios, resulta por demás evidente que las obligaciones de los partidos políticos que deriven de esta garantía -respetar

la libertad de afiliación y, de ser necesario, acreditar que la incorporación a cada instituto político- no debe estar sujeta o condicionada a que éstos establezcan en sus normas internas disposiciones encaminadas a su protección, es decir, no depende, del momento en el que los partidos políticos hayan incluido en sus normas internas la obligación de que la afiliación sea voluntaria.

Por cuanto hace al elemento subjetivo señalado líneas arriba, debe destacarse que, la autoridad, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

En principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento que formula en contra de la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde al quejoso.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441, de la *LGIE*.

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que contaba con el consentimiento de los quejosos para afiliarlos a su partido político, y no a los ciudadanos que negaron haber solicitado su inclusión en el padrón de militantes del PAN.

Así, como vimos, en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, está demostrado a partir de la información proporcionada por la *DEPPP* que los ciudadanos denunciados se encontraron, en ese momento, como afiliados del *PAN*.

Por otra parte, el *PAN* no demuestra con medios de prueba, que la afiliación respectiva fue el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de los ciudadanos, en los cuales, ellos mismos, *motu proprio*, expresaron su consentimiento y, por ende, proporcionaron sus datos personales a fin de llevar a cabo la afiliación a dicho instituto político.

Debiendo precisar que la carga de la prueba corresponde al *PAN*, en tanto que el dicho de la actora consiste en demostrar que no dio su consentimiento para ser afiliada, y en cuanto a los dos ciudadanos restantes, manifestar que ya solicitaron su baja al padrón de militantes de dicho partido, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba.

En tanto que los partidos políticos, cuya defensa consiste básicamente en afirmar que sí cumplieron las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación, tienen el deber de probar esa situación.

Ahora bien, tal y como quedó de manifiesto en el apartado del *MARCO NORMATIVO* de la presente Resolución, así como en el correspondiente a *CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE VIOLACIÓN AL DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO*, la libertad de afiliación en materia político-electoral, es un derecho reconocido y así garantizado para todo ciudadano de nuestro país, al menos desde hace varias décadas, tanto a nivel constitucional como legal, el cual es concebido como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido político, permanecer afiliado a éste, desafiliarse e, incluso, no pertenecer a ninguno. Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección de datos personales e información relacionada con la vida privada de las personas, es igualmente un derecho con una trayectoria de protección por demás lejana.

En este sentido, es pertinente dejar en claro que la garantía y protección a los citados derechos, evidentemente no deriva de disposiciones reglamentarias al interior de los institutos políticos, que prevean como obligación del partido político, la conservación de los expedientes de afiliación de cada miembro, ni tampoco a

partir de la emisión de los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, emitidos por el propio INE en la Resolución CG617/2012, sino que, como se vio, el derecho tutelado deviene de disposiciones de rango supremo, el cual debe ser tutelado en todo momento, y no a partir de normas internas o reglamentarias que así lo establezcan.

En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos políticos es un derecho de los ciudadanos previsto como garantía constitucional en nuestro país desde hace décadas, también lo es la obligación de los partidos políticos de preservar, y en su caso, de demostrar, en todo momento, que cualquier acto que engendre la voluntad de un ciudadano para formar parte en las filas de un instituto político, esté amparado en el o los documentos que demuestren indefectiblemente el acto previo del consentimiento.

En este sentido, toda vez que los denunciantes denuncian al *PAN*, en el caso de **Jessica Samantha Hernández Arroyo**, por una afiliación indebida y, en los casos de **Eduardo Zepeda Monzón** y **Miguel Ángel Delgado Colín**, por la omisión a darlos de baja de su padrón de afiliados, el estudio de fondo del presente asunto se realizará en dos apartados:

Apartado A. Ciudadanos sobre los que SÍ se violó su derecho a la libre afiliación en su vertiente de no permitirles ser desafiliados

Respecto a **Eduardo Zepeda Monzón** y **Miguel Ángel Delgado Colín**, el presente procedimiento sancionador ordinario es **FUNDADO** en contra del *PAN*, por las razones y consideraciones siguientes:

De conformidad con lo asentado en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, está demostrado, a partir de la información proporcionada por la *DEPPP* y el propio instituto político denunciado, que los hoy quejosos se encuentran afiliados al *PAN*.

No obstante, **Eduardo Zepeda Monzón** y **Miguel Ángel Delgado Colín**, se inconformaron por la negativa del *PAN* de desincorporarlos de su padrón de militantes, aún y cuando presentaron previamente ante ese instituto político los correspondientes escritos en los que, cada uno de ellos, hizo patente su petición de ser dados de baja de los registros de afiliados, sin que esto hubiera ocurrido.

Así, en términos de la información que obra en autos se advierte que:

1. No está a debate que, en algún momento, **los ciudadanos se afiliaron libre y voluntariamente al PAN**, con base en sus propias manifestaciones.
2. **Miguel Ángel Delgado Colín** manifestó que el **veintisiete de agosto de dos mil catorce**, presentó escrito de renuncia al *PAN*, adjuntando copia simple del acuse del referido documento.
3. **Eduardo Zepeda Monzón** manifestó que el **ocho de marzo de dos mil dieciocho**, presentó escrito de renuncia al *PAN*, adjuntando acuse original del referido documento.
4. Conforme a la información proporcionada por la *DEPPP*, **se advirtió que al veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, los quejosos aparecieron en el padrón de militantes del PAN con afiliación válida**, de conformidad con la información extraída del *Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos*, capturados por el propio partido político, con corte al treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, con el propósito de acreditar el número mínimo de afiliados para la conservación de su registro.
5. Conforme a la información proporcionada por la *DEPPP*, se advirtió que el 03 de julio de dos mil dieciocho, el *PAN* realizó en el sistema de cómputo la cancelación del registro de **Miguel Ángel Delgado Colín** como su militante, ingresando como fecha de baja el 05 de noviembre de 2014.
6. Conforme a la información proporcionada por la *DEPPP*, se advirtió que el 03 de julio de dos mil dieciocho, el *PAN* realizó en el sistema de cómputo la cancelación del registro de **Eduardo Zepeda Monzón** como su militante, ingresando como fecha de baja el 15 de noviembre de 2017.
7. La *DEPPP* informó que ***las fechas de afiliación y las de baja fueron capturadas por el partido político.***
8. El *PAN* realizó el movimiento de cancelación de registro de los ciudadanos quejosos el 03 de julio de 2018, es decir, por lo menos a esa fecha, el instituto

político mantuvo registrados como sus afiliados a los quejosos en contra de su voluntad.

Con base en las anteriores conclusiones, esta autoridad considera que el partido incurrió en una violación al derecho de libertad de afiliación política, en su modalidad de **no permitir la desincorporación de estos ciudadanos como sus militantes**, en perjuicio de los hoy quejosos, con motivo de la omisión o falta de cuidado en darlos de baja de su padrón de afiliados, previa solicitud que por escrito se le formuló con ese propósito.

En efecto, tal y como se ha referido en el apartado de marco normativo de la presente Resolución, todo ciudadano mexicano tiene derecho a asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III y 41, párrafo segundo Bases I, párrafo segundo *in fine*, y IV, de la *Constitución*, así como 5°, párrafo 1, del *COFIPE*, este último replicado en el diverso 3, párrafo 2, de la *LGPP*.



Así, en ejercicio del derecho de asociación en materia político-electoral, los ciudadanos pueden formar partidos y agrupaciones políticas, cumpliendo para ello con los requisitos que establece la ley.

En este contexto, la libertad de asociación política constituye la base de la formación de los partidos, de manera que, en ejercicio de esa potestad, todo ciudadano, por igual, puede formar parte de ellos bajo la condición de cumplir con los requisitos que establece la norma, pudiendo también, en consonancia con esa libertad, tener la posibilidad de **desafiliarse** de éste en el momento que así lo desee.

Con base en ello, se considera que existirá violación a la libertad de afiliación, por parte de un partido político, cuando sin mediar justificación alguna, mantiene en contra de su voluntad a un ciudadano dentro de su padrón de afiliados, toda vez que dichas personas morales, en su calidad de entidades de interés público, en términos del numeral 41, Base I, de la *Constitución* tienen el deber irrestricto de garantizar el libre ejercicio de derechos fundamentales de todos los ciudadanos, entre ellos, los relativos a la libertad de afiliación política y, al no actuar de esta forma, evidentemente afecta su esfera jurídica, al relacionarlos con una fuerza política a la que ya no quieren pertenecer, siendo que su derecho a terminar el vínculo que los unía con el partido se vio afectado.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/EZM/JD06/CHIS/142/2018

Como se mencionó, de las constancias que integran el expediente citado al rubro, se advierte que **Eduardo Zepeda Monzón y Miguel Ángel Delgado Colín** presentaron escrito de renuncia al *PAN*, en el cual obra, hora, fecha y firma de la persona que lo recibió, tal y como se aprecia a continuación:

ESCRITO DE EDUARDO ZEPEDA MONZÓN	ESCRITO DE MIGUEL ÁNGEL DELGADO COLÍN
<p style="text-align: right;">Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 08 de marzo de 2018</p> <p style="text-align: right;">Asunto: solicitud de baja.</p> <p>PARTIDO ACCIÓN NACIONAL P R E S E N T E</p> <p>Eduardo Zepeda Monzón, con clave de elector [] y propio derecho v señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en Calzada Residencial [], C. P. [] en esta ciudad, presento mi renuncia al padrón de afiliados/militantes a ese partido político, por así convenir a mis intereses.</p> <p>Anexo al presente, captura de pantalla de la consulta al portal de Afiliados por Partidos Políticos Nacionales y copia de mi credencial de elector.</p> <p>Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.</p> <p style="text-align: center;">A T E N T A M E N T E</p> <p style="text-align: center;">_____ EDUARDO ZEPEDA MONZÓN</p>  <p style="text-align: right;">CR 12:50hs.</p>	<p style="text-align: right;">Jojutla, Mor. a 27 de Agosto del 2014.</p> <p style="text-align: center;">ACUSE</p> <p>C. Norma Alicia Popoca Sotelo. Presidenta del Comité Directivo Estatal, Morelos Partido Acción Nacional P r e s e n t e</p> <p>ASUNTO: RENUNCIA</p> <p>Por este conducto me permito manifestarle mi deseo de RENUNCIAR, con carácter de irrevocable a mi condición de MIEMBRO ACTIVO del Partido Acción Nacional, a partir de esta fecha por motivos personales.</p> <p>Sin otro particular por el momento y esperando se agilice mi trámite agradezco sus atenciones.</p> <p style="text-align: center;">A t e n t a m e n t e</p> <p style="text-align: center;">_____ C. MIGUEL ANGEL DELGADO COLIN</p>  <p style="text-align: right;">ANEXO COPIA Credencial elector.</p>

Así, de conformidad con las constancias que fueron acompañadas por las partes en el procedimiento, se considera que el presente procedimiento debe declararse **FUNDADO**, lo anterior, porque el partido político denunciado no manifestó ni mucho menos acreditó la causa, motivo o razón por la cual mantuvo, por lo menos al tres de julio de dos mil dieciocho, en contra de su voluntad a **Eduardo Zepeda Monzón y Miguel Ángel Delgado Colín** dentro de un padrón de afiliados al cual no desean pertenecer.

Lo anterior es así, toda vez que, como ya se anunció, al tratarse de un ente de interés público, está obligado, entre otras cosas, a conducir sus actividades dentro

de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; al tenor de lo dispuesto en el inciso a) del párrafo 1, del artículo 25 de la *LGPP*.

En este sentido y de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales que le son aplicables, el *PAN*, debió garantizar el ejercicio fundamental de libre afiliación política, en todas sus vertientes, incluida por supuesto el de desafiliación de sus agremiados, razón por la cual no puede constituir una justificación el que se argumente que no se hayan cumplido con el proceso interno de dicho instituto político, siendo que ni siquiera, acreditó que los ciudadanos de referencia estuvieron en condiciones de imponerse ante el mismo, en los términos ya apuntados.

La anterior conclusión tiene sustento en la Tesis de Jurisprudencia **29/2002**,⁵⁰ cuyo rubro y texto es al tenor literal siguiente:

“DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA.

Interpretar en forma restrictiva los derechos subjetivos públicos fundamentales de asociación en materia política y de afiliación política electoral consagrados constitucionalmente, implicaría desconocer los valores tutelados por las normas constitucionales que los consagran, así cabe hacer una interpretación con un criterio extensivo, toda vez que no se trata de una excepción o de un privilegio, sino de derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados, no restringidos ni mucho menos suprimidos. En efecto, los derechos fundamentales de carácter político-electoral consagrados constitucionalmente, como los derechos de votar, ser votado, de asociación y de afiliación, con todas las facultades inherentes a tales derechos, tienen como principal fundamento promover la democracia representativa, habida cuenta que, conforme con lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa y democrática. Lo anterior, en virtud de que las reglas interpretativas que rigen la determinación del sentido y alcances jurídicos de una norma no permiten que se restrinja o haga nugatorio el ejercicio de un derecho fundamental, como lo son los de asociación política y de afiliación político-electoral; por el contrario, toda interpretación y la correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus alcances jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que

⁵⁰ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=29/2002&tpoBusqueda=S&sWord=29/2002>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/EZM/JD06/CHIS/142/2018

aquella esté relacionada con un derecho fundamental. Lo anterior, desde luego, no significa en forma alguna sostener que los derechos fundamentales de carácter político sean derechos absolutos o ilimitados.”

Por tanto, se concluye que el derecho fundamental de desafiliación de los denunciantes debió ser garantizado por el *PAN*, habida cuenta que su goce y ejercicio no es una prerrogativa cuya disponibilidad quede a cargo del partido político denunciado, sino exclusivamente de los ciudadanos.

Sirve de apoyo a los anteriores argumentos, lo establecido en la Tesis de Jurisprudencia **24/2002**,⁵¹ del *Tribunal Electoral*, de rubro y texto siguientes:

“DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES.- El derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 5o., párrafos 1 y 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas, y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios y, por tanto, con mayor especificidad que el derecho de asociación y está garantizado jurisdiccionalmente mediante el sistema de medios de impugnación en materia electoral previsto en el artículo 41, fracción IV, primer párrafo, in fine, en relación con lo dispuesto en el artículo 99, fracción V, de la Constitución federal. Además, el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también la prerrogativa de pertenecer a éstos con todos los derechos inherentes a tal pertenencia; en particular, el derecho fundamental de afiliación político-electoral consagrado constitucionalmente faculta a su titular para afiliarse o no libremente a un determinado partido político, conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos

⁵¹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/EZM/JD06/CHIS/142/2018

políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.”

A fin de dar mayor claridad a la presente Resolución, enseguida se esquematiza el tiempo transcurrido entre la fecha en que los hoy denunciantes presentaron ante el partido su escrito de desafiliación y en el momento que se presentó la queja que dio origen al presente asunto.

Quejoso	Queja	Fecha de renuncia	Tiempo que estuvo afiliado después de presentar renuncia a la presentación de la queja	Tiempo transcurrido entre la presentación de la renuncia y el 03/07/2018, fecha en que realizó la cancelación del registro
Eduardo Zepeda Monzón	03 de abril de 2018 ⁵²	08 de marzo de 2018 ⁵³	26 días	3 meses 25 días
Miguel Ángel Delgado Colín	14 de mayo de 2018 ⁵⁴	27 de agosto de 2014 ⁵⁵	3 años 8 meses 17 días	3 años 10 meses 6 días

Por lo anterior, este órgano colegiado considera pertinente declarar **fundado** el presente procedimiento, por lo que hace al presente apartado, pues se concluye que el *PAN* infringió las disposiciones electorales al no desafiliar a **Eduardo Zepeda Monzón** y **Miguel Ángel Delgado Colín**, no obstante las respectivas renunciaciones que estos presentaron ante dicho instituto político, violentando así su derecho de afiliación política, en su modalidad de no hacer efectiva su desafiliación, aunado a que para tal fin, utilizó sus datos personales de forma indebida.

Esto es así, porque la presentación de escritos de renuncia o solicitudes de baja, generan, en automático, una serie de cargas y obligaciones para el respectivo partido político, a fin de hacer efectivo el ejercicio de ese derecho fundamental; a saber:

- Debe recibir las solicitudes de renuncia o escritos por los que se solicita la baja de su padrón, sin poner trabas o barreras injustificadas para ello.

⁵² Visible a páginas 2 y anexos a páginas 4-6 del expediente.

⁵³ Visible a página 5 del expediente.

⁵⁴ Visible a páginas 14 y anexos a páginas 15-16 del expediente.

⁵⁵ Visible a página 15 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/EZM/JD06/CHIS/142/2018

Es decir, en ningún caso puede negarse a recibir o atender este tipo de solicitudes. Al contrario, debe remover todo obstáculo que impida o dificulte al ciudadano su presentación; incluso, debe establecer las condiciones necesarias para orientar a su militancia y dar cauce efectivo a las peticiones de esta índole.

- Cuando un órgano partidista no competente reciba una solicitud de baja o renuncia a la militancia deberá, de manera inmediata y sin mayor trámite, remitirlo al órgano partidario que resulte competente para su atención.
- El órgano partidista competente deberá atender de inmediato, sin dilaciones o retrasos injustificados, las solicitudes de desafiliación que se presenten y, consecuentemente, dar de baja de su padrón al o el peticionario en un plazo razonable.
- Cuando sea necesario que el o la interesado tengan conocimiento de un acto partidista relacionado con su solicitud de desafiliación, **deberá notificarlo personalmente a la o el interesado** en un tiempo breve y razonable. Ello conforme las razones esenciales de las Tesis de Jurisprudencia **32/2010**⁵⁶ y **31/2013**,⁵⁷ de rubros ***DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA EXPRESIÓN 'BREVE TÉRMINO' ADQUIERE CONNOTACIÓN ESPECÍFICA EN CADA CASO y DERECHO DE PETICIÓN. LA RESPONSABLE, DEBE INFORMAR AL PETICIONARIO CUANDO CONSIDERE QUE SU SOLICITUD NO REÚNE REQUISITOS CONSTITUCIONALES***, respectivamente.

Finalmente, no pasa inadvertido para este órgano resolutor, que **Eduardo Zepeda Monzón** y **Miguel Ángel Delgado Colín** presentaron copia simple y original, respectivamente, del escrito mediante el cual demostraron su gestión ante el propio partido para ser desafiliados, lo cual, de suyo constituye una prueba documental privada, en términos de lo dispuesto en los artículos 461, párrafo 3, inciso b) de la *LGIPE* y 22, párrafo 1, fracción II, del Reglamento de Quejas y Denuncias del *INE*.

⁵⁶ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=32/2010&tpoBusqueda=S&sWord=32/2010>

⁵⁷ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=31/2013&tpoBusqueda=S&sWord=31/2013>

Sin embargo, dichas documentales se estiman suficientes para tener por demostrada la solicitud de desafiliación aludida y, con base en ella, tener por acreditada la omisión del partido de atender esa petición, habida cuenta que con el documento en cita, se corrió traslado al partido político denunciado a efecto de que se pronunciara al respecto en la etapa de emplazamiento de que fue objeto, sin que el *PAN* objetara la autenticidad de los documentos base de los quejosos, así como tampoco su alcance y valor probatorio; lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de Quejas del *INE*, el cual establece, en lo que interesa, lo siguiente:

“Artículo 24
De la objeción

...

2. ...las partes podrán objetar la autenticidad de la prueba o bien su alcance y valor probatorio, debiendo indicar cuál es el aspecto que no se reconoce de la prueba o porque no puede ser valorado positivamente por la autoridad, esto es, el motivo por el que a su juicio no resulta idóneo para resolver un punto de hecho.

3. Para desvirtuar la existencia o verosimilitud de los medios probatorio ofrecidos, no basta la simple objeción forma de dichas pruebas, sino que es necesario señalar las razones concretas en que se apoya la objeción y aportar elementos idóneos para acreditarlas, mismos que tenderán a invalidar la fuerza probatoria de la prueba objetada.”

Esto es, de conformidad con el precepto reglamentario previamente transcrito, **no basta con objetar de manera formal el medio de prueba ofrecido por el partido político para desvirtuar la existencia o verosimilitud de la constancia de afiliación, sino que es necesario señalar las razones correctas en que se apoya la objeción y, también, aportar en el momento procesal oportuno, los elementos idóneos para acreditar su objeción.**

Resulta aplicable al caso, la Tesis de Jurisprudencia 4/2005⁵⁸ de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes:

⁵⁸ Jurisprudencia 1a./J. 4/2005, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, abril de 2005, Página 266.

“DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y PUEBLA, ESTA ÚLTIMA ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1998). En términos de lo dispuesto por los artículos 324 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 330 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, los documentos privados provenientes de las partes deben ser reconocidos expresa o tácitamente para que adquieran el valor probatorio que las propias legislaciones les otorgan. Ahora bien, **esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio reiterado de que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que es necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción.** Debido a que en las legislaciones adjetivas en cuestión no se establece ninguna regla específica sobre la carga probatoria en la hipótesis apuntada, para saber a quién corresponde dicha carga de la prueba sobre la objeción formulada, deben atenderse los hechos en que se funde la misma, aplicándose las reglas genéricas establecidas en los artículos 289 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 263 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, en cuanto a que **a cada parte corresponde probar los hechos de sus pretensiones. Por tanto, si la objeción de un documento privado proveniente de los interesados base de sus pretensiones se funda en la circunstancia de no haber suscrito el documento el objetante, a él corresponde la carga de la prueba.** Dicho de otra forma, **quien invoca una situación jurídica está obligado a probar los hechos fundatorios en que aquélla descansa; por lo contrario, quien sólo quiere que las cosas se mantengan en el estado que existen en el momento en que se inicia el juicio, no tiene la carga de la prueba, pues desde el punto de vista racional y de la lógica es evidente que quien pretende innovar y cambiar una situación actual, debe soportar la carga de la prueba.”**

[Énfasis añadido]

Bajo ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió, en concordancia con los preceptos invocados en líneas que anteceden, que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que debe ser necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción, es decir, que al objetante corresponde la carga de la prueba.

A efecto de robustecer lo anterior, se citan criterios de diversos Tribunales Colegiados de Circuito, en los que se han pronunciado en tal sentido sobre el tema:

- **DOCUMENTOS PRIVADOS. OBJECCIÓN A LOS.**⁵⁹
- **DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. CONFORME AL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA.**⁶⁰
- **DOCUMENTOS PRIVADOS. PARA NEGARLES VALOR PROBATORIO, NO BASTA LA SIMPLE OBJECCIÓN, SINO QUE DEBEN SEÑALARSE LAS CAUSAS EN QUE LA FUNDE Y DEMOSTRARLAS.**⁶¹
- **DOCUMENTOS PRIVADOS, CARGA DE LA PRUEBA EN CASO DE OBJECCIÓN A LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).**⁶²
- **DOCUMENTOS PRIVADOS. CARGA DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR LA OBJECCIÓN RESPECTO DE LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA CONTENIDA EN ELLOS.**⁶³
- **DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).**⁶⁴

⁵⁹ Jurisprudencia I.3Oc. J/8, Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, agosto de 1996, Página 423.

⁶⁰ Tesis Aislada XV.4o.12 C, Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, septiembre de 2009, Página 3128.

⁶¹ Jurisprudencia III. 1Oc. J/17, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Número 63, marzo de 1993, Página 46.

⁶² Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, agosto de 1993, Página 422.

⁶³ Tesis XXXI.3º 8 L, Tercer Tribunal Colegiado de Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, abril de 2002, Página 1254.

⁶⁴ Tesis II. o C, 495 C, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, septiembre de 2005, Página 1454.

De igual forma, resulta aplicable la Tesis de Jurisprudencia I.3o.C. J/11⁶⁵, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes:

“DOCUMENTOS PRIVADOS INSUFICIENTEMENTE OBJETADOS POR EL PROPIO FIRMANTE, VALOR PROBATORIO DE LOS. En tratándose de documentos privados, debe hacerse la distinción entre aquellos que provienen de terceras personas y los que se atribuyen a las partes litigantes en la controversia. Respecto de los primeros, basta la objeción del instrumento privado, debidamente razonada, para que pierda su valor probatorio, quedando a cargo del oferente la carga de la prueba y apoyar su contenido aportando otros elementos de convicción, y en relación con el segundo supuesto, para tener por satisfecho lo dispuesto por el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es menester que **la parte a quien perjudique realice en tiempo, forma y suficiencia la objeción, para que pierda su alcance probatorio dicho instrumento. De esta manera, se tiene que si en un caso la contraparte del oferente, al dársele vista con el documento exhibido, se limitó a manifestar que no lo había firmado, tal aseveración no pudo constituir la causa suficiente de objeción que demeritara el alcance de esa probanza, ya que para tal efecto resulta indispensable que existan causas motivadoras de la invalidez de la prueba y que se aportaran las pruebas idóneas para tal fin, como pudieron ser las periciales grafoscópicas, grafológicas y caligráficas;** elementos que no se rindieron para acreditar la impugnación, como lo dispone el artículo 341 del código citado.”

[Énfasis añadido]

En igual sentido, el Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito en la Tesis de Jurisprudencia III.1o.C. J/29⁶⁶, sostuvo el referido criterio en el siguiente sentido:

“DOCUMENTOS PRIVADOS, PRUEBA DE LA FALSEDAD DE LA FIRMA DE LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Una interpretación armónica de los artículos 342, 343, 344, 345, 346 y 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, lleva a concluir que cuando **se objeta la autenticidad de la firma de un documento privado es necesario pedir el cotejo de la misma con una señalada como indubitable; además, debe ofrecerse la prueba pericial respectiva, dado que la falsificación de la firma es un punto que sólo puede ser**

⁶⁵ Tesis I.3o. C J/11, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre de 1997, Página 615.

⁶⁶ Jurisprudencia III.1o.C. J/29, Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Página 680.

determinado por una persona con conocimientos especiales en la materia, es decir, por un perito grafógrafo, aun cuando exista diferencia notoria entre las firmas cuestionadas, porque tal circunstancia, por sí sola, no revela lo apócrifo de una de ellas, sino únicamente la diferencia entre ambas.”

[Énfasis añadido]

Lo anterior, en suma, significa que para destruir la presunción de inocencia que surge en favor del denunciado cuando aporta elementos de prueba idóneos para demostrar que la afiliación cuestionada estuvo precedida de la manifestación de voluntad del quejoso, tal como las constancias de afiliación correspondientes, o bien, elementos que pongan de manifiesto que el quejoso realizó hechos positivos derivados de su militancia, no basta que, de manera abstracta y genérica, el quejoso afirme que dichos medios de convicción no son veraces o auténticos.

Lo anterior, atento que, conforme a la normatividad que rige los procedimientos sancionadores electorales y que inexcusablemente está obligado a seguir este Consejo General, resulta imperativo que quien objeta un medio de prueba, señale específicamente cuál es la parte que cuestiona, y al efecto aporte, o cuando menos señale, conforme a la regla general relativa a que a quien afirma le corresponde probar —vigente en los procedimientos sancionadores electorales conforme a lo establecido por la Sala Superior—, los elementos objetivos y ciertos que puedan conducir a destruir la eficacia probatoria de los elementos aportados por el denunciado en su defensa, pues de otra manera, el principio de presunción de inocencia deberá prevalecer apoyado en las evidencias allegadas al procedimiento por el presunto responsable.

Con base en lo expuesto, se considera que debe concederse el valor y eficacia probatoria plena a las citadas documentales, ya que, con independencia de las razones expuestas en los párrafos que preceden, esta autoridad debe privilegiar y garantizar el derecho de libertad de afiliación en favor del denunciante que constituye este apartado, debiendo sancionar al partido por la conducta que se declaró fundada, a efecto de evitar en casos futuros la repetición de conductas con la que nos ocupa.

En consecuencia, al determinarse que el *PAN* infringió la norma electoral ya señalada, se declara **fundado** el presente procedimiento, por cuanto hace a la omisión de desafiliar a **Eduardo Zepeda Monzón y Miguel Ángel Delgado Colín**, así como por el uso indebido de sus datos personales.

Apartado B. Ciudadana que fue afiliada indebidamente al *PAN*

Respecto a **Jessica Samantha Hernández Arroyo**, el presente procedimiento sancionador ordinario es **FUNDADO** en contra del *PAN*, por las razones y consideraciones siguientes:

Es importante señalar que el *PAN* argumentó que, a la fecha, su registro de **afiliación de la ciudadana ha sido cancelado**, atento a su escrito de renuncia a la militancia a dicho instituto político, procedió a darla de baja de su padrón.

Es decir, el *PAN* reconoce la afiliación de la ciudadana en cita, esto es, existe una confesional por parte de dicho instituto político que cobra relevancia al caso, porque corrobora de una manera indirecta que Jessica Samantha Hernández Arroyo fue registrada como afiliada del partido político denunciado.

No obstante, lo anterior, dicho argumento resulta ser intrascendente en el presente asunto, ya que el *PAN* no aportó la documentación que acredite la afiliación libre, individual, voluntaria, personal y pacífica de tal sujeto, en los términos establecidos en su normatividad interna.

Es decir, el registro de Jessica Samantha Hernández Arroyo por parte del *PAN* en su padrón de militantes no está controvertido, ni tampoco la circunstancia de que, a la fecha, siga manteniendo o no su registro en dicho instituto político, sino lo que, en el caso se debe determinar si esa afiliación se llevó a cabo o no de forma libre, individual, voluntaria, personal y pacífica.

Sobre esto último, como se ha establecido, se considera que la cédula o solicitud de afiliación es el documento idóneo para acreditar la libre afiliación, lo cual no fue acreditado por el *PAN*.

Finalmente, es de referir que, de las diligencias de investigación practicadas en el presente procedimiento, se advierte que la *DEPPP*, órgano central del *INE* encargado de la concentración de los padrones de los diversos partidos nacionales, así como de la verificación de los mismos, encontró a esa ciudadana, registrada como militante del *PAN*.

En mérito de lo anterior, existe evidencia que hace suponer que la afiliación a la que se refiere en este apartado, fue producto de una acción ilegal por parte del *PAN*.

Por lo anterior, este órgano colegiado considera pertinente declarar **FUNDADO** el presente procedimiento, pues se concluye que el *PAN* infringió las disposiciones electorales tendentes a demostrar la libre afiliación de Jessica Samantha Hernández Arroyo, quien apareció como afiliado a dicho instituto político, por no demostrar el acto volitivo de éste para permanecer agremiado a ese partido.

En efecto, como se demostró anteriormente, la denunciante que apareció afiliado al *PAN*, manifestó que en momento alguno otorgó su consentimiento para ello, siendo que dicho instituto político no demostró lo contrario, por lo que se actualiza la violación al derecho fundamental de libre afiliación garantizado desde la Constitución y la ley, según se expuso.

Al respecto, es importante destacar, en lo que interesa, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada el seis de junio de dos mil dieciocho, al resolver el medio de impugnación con clave SUP-RAP 141/2018:⁶⁷

“...si los ciudadanos referidos alegaron que no dieron su consentimiento para pertenecer al partido político recurrente, implícitamente sostienen que no existe la constancia de afiliación atinente; por tanto, los ciudadanos no estaban obligados a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba tampoco son objeto de demostración los hechos negativos, salvo que envuelvan una afirmación.”⁶⁸

⁶⁷ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_judicial/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0141-2018.pdf

⁶⁸ De conformidad con los numerales 461 de la *Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales*, en relación el diverso 441 de ese ordenamiento y 15, segundo párrafo, de la *Ley de Medios*

Esto es, en el tema que nos ocupa, conforme a lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada en el medio de impugnación SUP-RAP 141/2018, la carga probatoria corresponde a los partidos políticos, en el caso al *PAN*, ente político que *se encuentra obligado a demostrar que la solicitud de ingreso al partido fue voluntaria, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad o, en su caso, también tenía la posibilidad de probar sus afirmaciones a través de otros medios de prueba como lo sería documentales que justificaran la participación voluntaria de dichas personas en la vida interna del partido y con carácter de militante, como lo serían, por ejemplo, documentales que evidenciaran el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas, el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras,*⁶⁹ circunstancia que, en el particular no aconteció.

Así pues, el *PAN*, en el caso analizado, no demostró que la afiliación de Jessica Samantha Hernández Arroyo se realizó a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que dicho ciudadano haya dado su consentimiento para ser afiliado, ni mucho menos que haya permitido o entregado datos personales para ese fin, los cuales se estiman necesarios para procesar las afiliaciones, dado que estos elementos se constituyen como insumos obligados para, en su momento, llevar a cabo una afiliación, de ahí que esto sea necesario e inescindible.

Con base en ello, ante la negativa de Jessica Samantha Hernández Arroyo de haberse afiliado al *PAN*, correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de medios de prueba idóneos, que la afiliación se llevó a cabo a través de los mecanismos legales para ello, en donde constara fehacientemente la libre voluntad de la hoy promovente, lo que no hizo, siendo que el solo hecho de aparecer en su registro electrónico es insuficiente para acreditar el ejercicio libre, personal y voluntario del derecho de afiliación a dicho instituto político.

Es decir, no basta con que la quejosa aparezca como afiliada al *PAN* en sus registros electrónicos, sino que dicho instituto político debió demostrar, con

⁶⁹ Criterio sostenido en la sentencia dictada en el medio de impugnación SUP-RAP 141/2018.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/EZM/JD06/CHIS/142/2018

documentación soporte o pruebas idóneas, que dichas afiliaciones se realizaron de forma libre o voluntaria, o bien, que la aparición del nombre y datos de la quejosa en su padrón de militantes, fue consecuencia de un error involuntario o de alguna circunstancia diversa, pero no lo hizo.

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación al *PAN* implica, además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que pudiera haber servido de base o justificación al partido político para afiliar a la ahora quejosa.

Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales, tiene íntima vinculación con la afiliación indebida de Jessica Samantha Hernández Arroyo, lo cual ya quedó debidamente acreditado y, como consecuencia de ello, merece la imposición de la sanción que se determinará en el apartado correspondiente.

Cabe referir que a similar conclusión arribó este Consejo General en la resolución INE/CG120/2018, de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/ALC/CG/39/2017, así como en la resolución INE/CG448/2018, de once de mayo de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2017, las cuales fueron confirmadas por el *Tribunal Electoral* al dictar sentencia el veinticinco de abril y once de mayo de dos mil dieciocho, en los medios de impugnación con clave SUP-RAP-047/2018⁷⁰ y SUP-RAP-137/2018,⁷¹ respectivamente, derivado de una falta de la misma naturaleza a la que aquí se estudia, en donde se determinó que el uso de datos personales poseía un carácter intrínseco o elemento esencial para la configuración de una afiliación indebida.

⁷⁰ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0047-2018.pdf

⁷¹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0137-2018.pdf

CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de las faltas denunciadas, así como la responsabilidad por parte del **PAN**, en los casos detallados en el considerando que antecede, procede ahora determinar la sanción correspondiente, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 355, párrafo 5 del COFIPE, cuyo contenido se reproduce en el diverso 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, relativo a la gravedad de la responsabilidad en que se incurra; el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; y, en su caso, la reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.

En relación con ello, el *Tribunal Electoral* ha sostenido que para individualizar la sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción electoral.

1. Calificación de la falta

A. Tipo de infracción

Partido	Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
PAN	La infracción se cometió por acción y omisión del partido político denunciado, que transgrede disposiciones de la <i>Constitución</i> , del COFIPE, en el momento de su comisión, así como de la <i>LGIPE</i> y la <i>LGPP</i> .	La conducta fue la afiliación indebida de una (1) ciudadana, y la omisión de dar de baja del padrón de afiliados de militantes a dos (2) ciudadanos por parte del PAN	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del COFIPE; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la <i>LGIPE</i> ; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la <i>LGPP</i> .

B. Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o prohibidas.

En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el particular, se acreditó que al **PAN** registro o incluyó indebidamente en su padrón de afiliados a **Jessica Samantha Hernández Arroyo**, sin demostrar que para incorporarla medió la voluntad de ésta de inscribirse como militante de dicho instituto político; asimismo, porque dicho partido incluyó o mantuvo indebidamente en su padrón de afiliados a **Eduardo Zepeda Monzón** y **Miguel Ángel Delgado Colín**, no obstante que tales ciudadanos presentaron escrito de renuncia manifestando su voluntad de no permanecer como militantes de dicho instituto político, violentando con ello lo establecido en los artículos 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; y 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e) del **COFIPE**; 443, párrafo 1, incisos a) y n); de la **LGIPE**, y 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la **LGPP**.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de los ciudadanos mexicanos, de optar libremente por ser o no militante de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, efectivamente consintieron libremente en ser sus agremiados.

Por otra parte, como se analizó, para la afiliación indebida acreditada en el expediente que se resuelve se usaron los datos personales de los promoventes sin

que éstos hubiesen otorgado su consentimiento para ello, lo cual, constituye un elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida.

En efecto, si bien es cierto, a partir de las constancias que obran en autos no está demostrado que los datos personales hubieran sido utilizados con un propósito diverso a la afiliación indebida en sí misma, o bien su difusión frente a terceros, lo es también que dicha información fue necesaria para materializar la incorporación de los datos de los actores al padrón de militantes del partido político denunciado.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo argumentado en la sentencia de siete de junio de dos mil dieciocho dictada por la Sala Superior al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-141/2018,⁷² en la que se estableció, en lo que interesa sobre el tema, lo siguiente:

“...los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de un ciudadano pertenecer a un partido político, no puede alegar que existe uso indebido de sus datos personales porque se consideran públicos.

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban pertenecer.”

De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción correspondiente al **PAN**.

C. Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que el **PAN** transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la normativa interna del instituto partido político, y que, tal infracción se cometió en detrimento de

⁷² Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0141-2018.pdf

los derechos de más de un ciudadano, esta situación no conlleva estar en presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de afiliación y desafiliación al instituto político denunciado, quien incluyó o mantuvo en su padrón de militantes a los hoy quejosos, sin demostrar el consentimiento previo para ello.

D. Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

a) Modo. En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles al **PAN**, consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la *Constitución*; así como 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e) del COFIPE disposiciones que se encuentran replicadas en los diversos dispositivos 443, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la LGPP, por lo siguiente:

- Al incluir en su padrón de afiliados a Jessica Samantha Hernández Arroyo, sin tener la documentación soporte que acredite fehacientemente la voluntad de ésta de pertenecer a las filas de ese instituto político.
- En el caso de Eduardo Zepeda Monzón y Miguel Ángel Delgado Colín, al mantener su registro de militantes en contra su voluntad, tal y como se advirtió a lo largo de la presente Resolución de forma pormenorizada.

b) Tiempo. En el caso concreto, como se razonó en el considerando que antecede, las infracciones cometidas por el **PAN**, se realizaron conforme a lo siguiente:

- **Afiliación indebida**

Jessica Samantha Hernández Arroyo

Fecha de afiliación: **25/05/2011**

▪ **Omisión de cancelar registro de afiliación**

Respecto a **Eduardo Zepeda Monzón** y **Miguel Ángel Delgado Colín**, ciudadanos que presentaron su escrito de renuncia a la militancia del **PAN**, y de la cual dicho partido no los dio de baja de su padrón de militantes, se tendrá como temporalidad de la realización de la conducta, el día de la presentación de la referida solicitud de baja, ya que se considera que fue en ese momento en que el denunciado, a pesar de haber sido enterado de la voluntad de los ciudadanos de ya no pertenecer a sus filas, no realizó los trámites correspondientes a efecto de eliminarlos de su padrón de militantes, de manera pronta.

Quejoso	Fecha de renuncia	Tiempo transcurrido entre la presentación de la renuncia y el 03/07/2018, fecha en que realizó la cancelación del registro
Eduardo Zepeda Monzón	08 de marzo de 2018 ⁷³	3 meses 25 días
Miguel Ángel Delgado Colín	27 de agosto de 2014 ⁷⁴	3 años 10 meses 6 días

- c) **Lugar.** Con base en las razones plasmadas en los escritos de denuncias, se deduce que las faltas atribuidas al **PAN** se cometieron de la siguiente manera:

No.	Quejoso	Entidad
1	Jessica Samantha Hernández Arroyo	Nayarit
2	Eduardo Zepeda Monzón	Chiapas
3	Miguel Ángel Delgado Colín	Morelos

E. Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Se considera que en el caso existe una conducta **dolosa** por parte del **PAN**, en violación a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo;

⁷³ Visible a página 5 del expediente.

⁷⁴ Visible a página 15 del expediente.

35, fracción III y 41, fracción I de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e) del COFIPE, disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la LGPP.

La falta se califica como **dolosa**, por lo siguiente:

- El *PAN* es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus constitucional de **entidad de interés público**, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la *Constitución*; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- El *PAN* está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 38, párrafo 1, inciso a), del *COFIPE*, disposición que se replica en el diverso 25, párrafo 1, inciso a) de la *LGPP*.
- El de libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
- La desafiliación a un partido político, es una modalidad del derecho fundamental de libre afiliación, por el cual un ciudadano elige libremente, en cualquier momento y sin restricción alguna de terceros, ya no pertenecer al mismo.

- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.
- Todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación o desafiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.
- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e), del COFIPE.
- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria**.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La violación a la libertad de afiliación, es de orden constitucional y legal que **requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano que aun cuando haya manifestado su voluntad de ser dado de baja de un padrón de afiliados, se conserve su registro injustificadamente.**

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta se considera dolosa, porque:

- 1) Jessica Samantha Hernández Arroyo aduce que no solicitó en momento alguno su registro o incorporación como militante al *PAN*.
- 2) Eduardo Zepeda Monzón y Miguel Ángel Delgado Colín, manifiestan su deseo de dejar de pertenecer a las filas de militantes del *PAN*.
- 3) Quedó acreditado que los quejosos aparecieron en el padrón de militantes del *PAN*.
- 4) El partido político denunciado no demostró que la afiliación de Jessica Samantha Hernández Arroyo se hubiera realizado a través de los mecanismos legales y partidarios conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y voluntaria de la denunciante.
- 5) El partido denunciado no demostró ni probó que la afiliación de Jessica Samantha Hernández Arroyo y la desafiliación, en el caso, de Eduardo Zepeda Monzón y Miguel Ángel Delgado Colín, fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos razonables, ni elementos de prueba

que sirvieran de base, aun indiciaria, para estimar que la afiliación de los quejosos fue debida y apegada a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.

F. Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el **PAN**, se cometió al afiliar indebidamente a Jessica Samantha Hernández Arroyo, sin demostrar al acto volitivo de ésta de ingresar y, en el caso, de Eduardo Zepeda Monzón y Miguel Ángel Delgado Colín, de permanecer inscrito en su padrón de militantes como de haber proporcionado sus datos personales para ese fin.

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en garantizar el derecho de libre afiliación y la protección de los datos personales de los ciudadanos mexicanos, mediante la conservación de los documentos atinentes que permitan demostrar el acto de voluntad de los ciudadanos quejosos de militar en los distintos partidos políticos ni para el uso de sus datos personales.

2. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A. Reincidencia

Por cuanto a la **reincidencia** en que pudieron haber incurrido el **PAN**, este organismo electoral autónomo considera que **no se actualiza**.

De conformidad con el artículo 355 párrafo 6 del *COFIPE*, cuyo contenido reproduce el diverso 458, párrafo 6 de la *LGIPE*, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el mencionado *Código*, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, la *Sala Superior* ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);
2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
3. Que en ejercicios anteriores el infractor **haya sido sancionado por esa infracción mediante Resolución o sentencia firme.**

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el *Tribunal Electoral*, a través de la Tesis de Jurisprudencia **41/2010**, de rubro **REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.**⁷⁵

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con anterioridad.

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta.

En este sentido, debe precisarse que, en el presente asunto, no puede considerarse actualizado dicho supuesto por cuanto hace al **PAN**, pues en los archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya sancionado a ese instituto político por faltas como la que se sanciona por esta vía, que se hayan dictado con anterioridad a los hechos materia de las presentes denuncias.

⁷⁵ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010>

B. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de Jessica Samantha Hernández Arroyo y la desafiliación, en el caso, de Eduardo Zepeda Monzón y Miguel Ángel Delgado Colín, al *PAN*.
- Se comprobó que el *PAN* afilió a Jessica Samantha Hernández Arroyo sin demostrar contar con la documentación soporte correspondiente.
- Se comprobó que el *PAN* no desafilió, por lo menos al tres de julio de dos mil dieciocho, a Eduardo Zepeda Monzón y Miguel Ángel Delgado Colín sin demostrar que medió la voluntad de su agremiado de pertenecer nuevamente o estar inscrito a dicho instituto político.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/EZM/JD06/CHIS/142/2018

- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, incluso en su modalidad de desafiliación, de optar por ser o no militante de algún partido político, y la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.
- Para materializar la violación a la libertad de afiliación de los denunciantes, se utilizaron indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para registrarlos y/o mantenerlos de forma indebida dentro del padrón de afiliados del partido denunciado.
- No existió un beneficio por parte del partido denunciado, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral.
- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso Electoral.
- No existe reincidencia por parte del *PAN*.

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente **calificar la falta** en que incurrió el *PAN* como de **gravedad ordinaria**, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el partido denunciado dolosamente infringió el derecho de libre afiliación de los hoy quejosos, lo que constituye una violación al derecho fundamental de los ciudadanos reconocidos en la *Constitución*.

Al respecto, es importante precisar que para efectos de determinar el monto de la sanción a imponer se debe diferenciar, **como en el caso acontece, si se está ante una afiliación indebida o una violación al derecho de libre afiliación en su vertiente de no permitirle al quejoso ser desafiliado.**

Sirve de apoyo a lo anterior, lo resuelto por la Sala Superior al dictar sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-141/2018, en la que determinó, esencialmente, lo siguiente:

“Finalmente, para efectos de la sanción a imponer, consideró oportuno diferenciar entre aquellos ciudadanos de los que se utilizaron indebidamente sus datos personales para afiliarlos sin su consentimiento al partido denunciado (once ciudadanos) y aquélla que denunció la presunta indebida afiliación en su vertiente de falta de atención al derecho de desafiliación, puesto que, si bien en ambos casos estamos ante la presencia de una falta grave ordinaria, lo cierto es que en el primero de los supuestos hubieron hechos afirmativos tendentes a menoscabar el derecho de libre afiliación, utilizando datos personales de los afectados y en el segundo, se trata de una omisión, lo cual conlleva que la sanción imponer en cada supuesto sea diferenciada.

Por tal motivo, en el caso concreto, se estima que la motivación expuesta por el Instituto Nacional Electoral fue suficiente para justificar la individualización de la sanción.”

C. Sanción a imponer

Ahora bien, la mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción.

Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor entidad.⁷⁶

El artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIPE*, dispone el catálogo de sanciones a

⁷⁶ Véase la tesis XXVIII/2003 del *Tribunal Electoral*, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.

imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México; reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita; y en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la *Constitución* y de la *LGIPE*, con la cancelación de su registro como partido político.

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción (especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción acreditada), así como la conducta realizada por el **PAN** se determina que debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida.

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la *LGIPE*, confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que, a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realicen una falta similar.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que ni el *COFIPE* ni la *LGIPE*, determinan pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/EZM/JD06/CHIS/142/2018

potestad; por el contrario, solo establecen las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

Asimismo, es importante tomar en cuenta que el número de ciudadanos en los que se actualizó la violación al derecho a la libre afiliación tanto en su vertiente de afiliación indebida de una ciudadana como en su vertiente de no permitir a dos ciudadanos ser desafiliados, por haber renunciado a su militancia, y el partido denunciado fue omiso en darlos de baja.

Con base en lo anterior, este Consejo General estima que, derivado de las circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida al **PAN**, justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 354, párrafo 1, inciso a) del COFIPE, cuyo contenido se replica con el diverso 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la LGIPE, consistente en una **MULTA unitaria por cuanto hace a cada uno de los tres ciudadanos sobre quienes se cometió la falta acreditada**, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto.

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la sanción a imponer.

▪ **Afiliación indebida**

En este orden de ideas, es pertinente hacer notar, que ha sido criterio de esta autoridad, en la resolución INE/CG120/2018, de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/ALC/CG/39/2017, así como en la resolución INE/CG448/2018, de once de mayo de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2017, las cuales fueron confirmadas por el *Tribunal Electoral* al dictar sentencia el veinticinco de abril y once de mayo de dos mil dieciocho, en los medios de impugnación con clave

SUP-RAP-047/2018⁷⁷ y SUP-RAP-137/2018,⁷⁸ respectivamente, en los que se sancionó por una afiliación indebida de un ciudadano, en cada caso, con una multa equivalente a **642 (seiscientos cuarenta y dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México**, al momento de la comisión de la conducta, sanción que se estima debe tomarse como base para el presente asunto, si se considera que en dichos asuntos se demostró la comisión de una infracción similar a la que acontece en los casos que aquí se resuelven.

▪ **Violación al derecho a la libre afiliación en su vertiente de no permitir a los ciudadanos ser desafiliados**

Cabe referir que ha sido criterio de este *Consejo General* en la resolución INE/CG536/2018,⁷⁹ de veinte de junio de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/GPM/JL/OAX/28/2018, derivado de una falta de la misma naturaleza a la que aquí se estudia, esto es por violación al derecho a la libre afiliación en su vertiente de no permitir a los ciudadanos ser desafiliados, sancionar con una multa equivalente a **321 (trescientos veintiún) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México y/o en su caso, Unidades de Medida y Actualización al**

⁷⁷ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0047-2018.pdf

⁷⁸ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0137-2018.pdf

⁷⁹ Consultable en la página de internet del *INE* o bien en la dirección electrónica: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96450/CGor201806-20-rp-16-10.pdf>

PAN, por UN ciudadano que no fue desafiliado (dependiendo del año de la presentación de la renuncia ante el partido).

En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta causa, y que en la especie se encuentra implicado una ciudadana, a quien el **PAN afilió indebidamente** y respecto a dos ciudadanos **violó su derecho a la libre afiliación en su vertiente de no permitirles ser desafiliados, ya que los mantiene en su padrón de militantes sin su consentimiento como sus afiliados, utilizando para ello sus datos personales**, por tanto, es claro que la individualización de la sanción que se aplique, debe resultar proporcional al número de ciudadanos en cuyo perjuicio se cometió la falta, sin perder de vista las condiciones socioeconómicas del instituto político.

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad debe determinar su monto o cuantía, **tomando en cuenta** las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que corresponda.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión que tiene sustento en la Tesis relevante **XXVIII/2003**,⁸⁰ emitida por el *Tribunal Electoral*, misma que a letra establece:

⁸⁰ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003>

“SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.-

En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.”

Ahora bien, a juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con base en lo dispuesto en la fracción II del numeral citado, lo procedente es imponer sendas **multas**, conforme a lo siguiente:

- **Afiliación indebida**

642 (seiscientos cuarenta y dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento de la comisión de la conducta.

- **Violación al derecho a la libre afiliación en su vertiente de no permitir a los ciudadanos ser desafiliados**

321 (trescientos veintiún) Unidades de Medida y Actualización, vigente al momento de la comisión de la conducta.

Al respecto, es un hecho notorio que se invoca en términos de lo establecido en el artículo 358 del *COFIPE*, cuyo contenido se replica en el diverso 461 de la *LGIPE*, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fija anualmente los montos respectivos, mismos que al ser relacionados con las fechas de afiliación u omisión

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/EZM/JD06/CHIS/142/2018

de desafiliación, para obtener la sanción que corresponde por cuanto a cada uno de los ciudadanos, arrojan lo siguiente:

PAN		
Total de quejosos	Salario mínimo/UMA	Sanción a imponer
Afiliación en 2011		
1	\$59.82	\$38,404.44
Omisión de desafiliación en 2014		
1	\$67.29	\$21,600.09
Omisión de desafiliación en 2018		
1	\$80.60 UMA	\$25,872.60
TOTAL		\$85,877.13 [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].

Sanción por ciudadano:

No	Ciudadano	Fecha de Afiliación u omisión de desafiliación	Salario mínimo/UMA	Sanción a imponer
1	Jessica Samantha Hernández Arroyo	25/05/2011	\$59.82	\$38,404.44
2	Miguel Ángel Delgado Colín	27/08/2014	\$67.29	\$21,600.09
3	Eduardo Zepeda Monzón	08/03/2018	\$80.60 UMA	\$25,872.60
TOTAL				\$85,877.13 [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, pues sin ser gravosa, sí puede inhibir al **PAN**, para que en el futuro vigile el cumplimiento de las normas de la materia.

Ahora bien, es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la *Constitución* —efectuado por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones.

En esas condiciones, lo procedente es transformar la sanción que se considera idónea, expresada en salarios mínimos, a Unidades de Medida y Actualización, para

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/EZM/JD06/CHIS/142/2018

lo cual es necesario dividir el monto inicial (seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México multiplicado por el salario mínimo vigente en cada año señalado en el cuadro), entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, misma que equivale, para el ejercicio fiscal en curso, a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M. N.).

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 10/2018,⁸¹ del *Tribunal Electoral*, de rubro y contenido siguiente:

“MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.- De la interpretación sistemática de los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transitorios segundo y tercero del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como 44, párrafo primero, inciso aa), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando en consideración el principio de legalidad que rige en los procedimientos sancionadores, se advierte que el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del ilícito.”

De esta manera, al aplicar la fórmula mencionada, se obtiene lo siguiente:

Salario mínimo vigente	El SMGV se multiplica por 642/321 días de SMGV en el año	La cifra obtenida de la multiplicación anterior, se divide entre la Unidad de Medida y Actualización vigente de \$80.60	La cifra obtenida de la operación anterior se multiplica por el número de ciudadanos	Sanción a imponer en Unidad de Medida y Actualización
Afiliación en 2011				
\$59.82	642	476.48	1	476.48
Desafiliación en 2014				

⁸¹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=Jurisprudencia,10/2018>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/EZM/JD06/CHIS/142/2018

Salario mínimo vigente	El SMGV se multiplica por 642/321 días de SMGV en el año	La cifra obtenida de la multiplicación anterior, se divide entre la Unidad de Medida y Actualización vigente de \$80.60	La cifra obtenida de la operación anterior se multiplica por el número de ciudadanos	Sanción a imponer en Unidad de Medida y Actualización
\$67.29	321	267.99	1	267.99

La suma de los montos antes referidos, corresponde a 744.47 (setecientos cuarenta y cuatro punto cuarenta y siete) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$60,004.28 (sesenta mil cuatro pesos 28/100 M.N.) [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].

A la cifra anterior, debemos sumar el monto correspondiente a **un** ciudadano que no fue desafiliado en 2018, sobre el cual se debe imponer la multa al **PAN**, de manera directa con la Unidad de Medida y Actualización vigente en ese año, siendo esta de \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.), lo que equivale a **\$25,872.60 (veinticinco mil ochocientos setenta y dos pesos 60/100 M.N.)** [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].

Así, de la suma de las cantidades de **\$60,004.28** (sesenta mil cuatro pesos 28/100 M.N.) y **\$25,872.60** (veinticinco mil ochocientos setenta y dos pesos 60/100 M.N.), se obtiene la cifra final siguiente:

- **\$85,876.88** (ochenta y cinco mil ochocientos setenta y seis pesos 88/100 M.N.).

Debe precisarse que se considera que la multa impuesta al **PAN** constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, ya que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, se concluye que la misma resulta eficaz y proporcional.

D. El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la infracción

Se estima que la infracción cometida por parte del **PAN**, aun cuando causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de la infracción.

E. Las condiciones socioeconómicas del infractor

Sobre este punto, es preciso señalar que conforme al Acuerdo INE/CG339/2017, emitido por este *Consejo General* el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se estableció que, entre otros, el **PAN** recibiría mensualmente en el presente ejercicio, por concepto de financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes, la siguiente cantidad:

SUJETO	Monto del financiamiento público para el sostenimiento de Actividades Ordinarias del mes de septiembre 2018
PAN	\$68,993,261.00

Ahora bien, según fue informado por la DEPPP, a través del oficio **INE/DEPPP/DE/DPPF/5693/2018**, el monto de la ministración mensual correspondiente a septiembre de dos mil dieciocho, debía ser ajustado en función de las sanciones administrativas pendientes de cubrir por dichos institutos políticos nacionales, por lo cual la cifra total a recibir sería la siguiente:

SUJETO	IMPORTE DE LA MINISTRACIÓN DE SEPTIEMBRE DE 2018	IMPORTE TOTAL DE LAS SANCIONES SEPTIEMBRE 2018	IMPORTE NETO DE LA MINISTRACIÓN
PAN	\$68,993,261.00	\$180,672.00	\$68,812,589.00

F. Impacto en las actividades del sujeto infractor

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta al **PAN**, no es de carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida, respecto al monto del financiamiento que recibirá por concepto de actividades ordinarias permanentes en el mes de septiembre del año en curso, los siguientes porcentajes:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/EZM/JD06/CHIS/142/2018

Partido político	Año	Monto de la sanción por ciudadano. ⁸²	Ciudadanos indebidamente afiliados y/o desafiliados	% de la ministración mensual por ciudadano
PAN	2011	\$38,404.28	1	0.05%
	2014	\$21,599.99	1	0.03%
	2018	\$25,872.60	1	0.03%

Por consiguiente, la sanción impuesta al **PAN** no es de carácter gravoso, si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual correspondiente al mes de septiembre de este año.

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción cometida por el **PAN** (especialmente los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con el financiamiento que recibe del *INE* para el mes de septiembre de dos mil dieciocho, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político sancionado.

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el partido político de mérito —tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagar sin que ello afecte sus operaciones ordinarias, además de que las sanciones son proporcionales a las faltas cometidas y se estima que, sin resultar excesivas ni ruinosas, pueden generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la *Sala Superior* en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-250/2009⁸³, es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

⁸² Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.

⁸³ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm>

QUINTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE LOS QUEJOSOS COMO MILITANTES. En tal sentido, se tiene que la voluntad de los denunciantes es no pertenecer al *PAN*, por lo que se debe vincular al partido político, para que, de ser el caso, en el supuesto que los quejosos continúen en su padrón de militantes, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentaron su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, los medios de prueba que amparen el cumplimiento.

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017,⁸⁴ de cinco de enero de dos mil diecisiete, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el *INE*, que lo vincule con un instituto político en particular.

Asimismo, se considera procedente es remitir copia certificada del escrito de queja con sus respectivos anexos al *PAN*, para que en el ámbito de su competencia realice las investigaciones pertinentes e instaure los procedimientos que su normativa interna establezca y de ser el caso, finque las responsabilidades que correspondan, por la omisión de sus órganos internos, de desafiliar a **Eduardo Zepeda Monzón y Miguel Ángel Delgado Colín**.

Sobre esto último, a similar conclusión arribó este Consejo General en la resolución INE/CG536/2018, de veinte de junio de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/GPM/JL/OAX/28/2018.

⁸⁴ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/JDC/2/SUP_2017_JDC_2-626321.pdf

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/EZM/JD06/CHIS/142/2018

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la *Constitución*,⁸⁵ se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previsto en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara **fundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra del **PAN**, al infringir las disposiciones electorales de libre afiliación de **tres ciudadanos**, en términos de lo establecido en el Considerando TERCERO de esta Resolución.

SEGUNDO. En términos del Considerando CUARTO de la presente Resolución, se impone al **PAN**, **una multa por la afiliación indebida u omisión de desafiliación** de los ciudadanos, conforme a los montos que se indican a continuación:

No	Ciudadano	Importe de la multa
1	Jessica Samantha Hernández Arroyo	476.48 (cuatrocientos setenta y seis punto cuarenta y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$38,404.44 (treinta y ocho mil cuatrocientos cuatro pesos 44/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2011]
2	Miguel Ángel Delgado Colín	267.99 (doscientos sesenta y siete punto noventa y nueve) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$21,599.99 (Veintiún mil quinientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.) [Ciudadano que solicitó su desafiliación en 2014]
3	Eduardo Zepeda Monzón	321 (trescientos veintiún) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$25,872.60 (veinticinco mil ochocientos setenta y dos pesos 60/100 M.N.) [Ciudadano que solicitó su desafiliación en 2018]

⁸⁵ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: **“TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL”**, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª), Página: 2864, Rubro: **“TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.”**

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/EZM/JD06/CHIS/142/2018

TERCERO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7 de la LGIPE, el monto de la multa impuesta al **PAN**, será deducido de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su Considerando CUARTO.

CUARTO. Se vincula al *PAN* para que, de ser el caso, en el supuesto que los quejosos continúen en su padrón de militantes, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentaron su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, los medios de prueba que amparen el cumplimiento, conforme a lo dispuesto en su Considerando QUINTO.

QUINTO. Se da vista al *PAN* a efecto de que en el ámbito de su competencia realice las investigaciones pertinentes e instaure los procedimientos que su normativa interna establezca y de ser el caso, finque las responsabilidades que correspondan, por la omisión de sus órganos internos, de desafiliar a dos ciudadanos, de conformidad con lo dispuesto en el Considerando CUARTO.

SEXTO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previsto en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Notifíquese personalmente a los ciudadanos Jessica Samantha Hernández Arroyo, Miguel Ángel Delgado Colín y Eduardo Zepeda Monzón.

Así como al **PAN**, por conducto de su representante ante este Consejo General; y por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1249/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO
EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018
DENUNCIANTES: ESTELA RAQUEL MURILLO
LARIOS Y OTROS
DENUNCIADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018 QUE SE DERIVA DE QUEJAS PRESENTADAS POR DIECINUEVE (19) CIUDADANOS, QUIENES PRESENTARON ESCRITOS POR LOS CUALES, CADA UNO DE ELLOS, HIZO DEL CONOCIMIENTO DE ESTA AUTORIDAD HECHOS PRESUNTAMENTE CONTRAVENTORES DE LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, RELACIONADOS CON LA AFILIACIÓN DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL PRESUNTAMENTE SIN SU CONSENTIMIENTO, PARA LO CUAL, EN SU CASO, SE UTILIZARON SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 12 de septiembre de dos mil dieciocho.

GLOSARIO	
COFIPE	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DEPPP	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
DERFE	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral
INE	Instituto Nacional Electoral

GLOSARIO	
<i>LGIPE</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>LGPP</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>PAN</i>	Partido Acción Nacional
<i>Sala Superior</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>Tribunal Electoral</i>	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

A N T E C E D E N T E

Como se refirió anteriormente, el presente procedimiento deriva de quejas presentadas por diecinueve (19) ciudadanos, quienes hicieron del conocimiento de esta autoridad hechos presuntamente contraventores de la normatividad electoral, consistentes en la presunta afiliación indebida de los sujetos que enseguida se enlistan, porque no medió consentimiento para ello ni para el uso de sus datos personales, conducta que se atribuye al *PAN*.

No.	Nombre	Escrito de Queja
1	Estela Raquel Murillo Larios	11/05/2018
2	Verónica Guzmán Mercado	11/05/2018
3	Karla Gretel Mendivil Quiñonez	08/05/2018
4	Ma. del Carmen Loera González	03/05/2018
5	José Alejandro Aguillon Cauich	11/05/2018
6	Maricruz Negrete Solís	09/10/2018
7	José Alberto Pérez Marrufo	16/05/2018
8	Francisco Javier Cervantes Germán	14/05/2018
9	Gabriel Nouche Ramírez	10/05/2018
10	Samuel Amezcua Peral	22/05/2018
11	Miriam Dolores Vidal Rita	28/05/2018
12	Feliciano Rosario Martínez	15/05/2018
13	Bianca Abigail Alarcón Zamora	25/05/2018
14	Rosa Elena Prado Ocegueda	29/05/2018
15	Dulce Monserrat García de Alba Rodríguez	24/05/2018
16	Brenda Imelda Borbón Escalante	27/04/2018
17	Claudia Rocío García Cano	25/05/2018
18	Héctor León Aviña	25/05/2018
19	Karla Janinne Mendizábal Valdés	25/05/2018

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018

I. Registro, admisión y reserva de emplazamiento.¹ El doce de junio de dos mil dieciocho, el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral instruyó el registro del procedimiento sancionador ordinario, al cual se le asignó la clave **UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018**, por la presunta afiliación indebida y el uso indebido de datos personales por parte del *PAN*.

En el acuerdo en cita, se admitió a trámite el procedimiento de sanción señalado con anterioridad y se reservó lo relativo al emplazamiento de las partes; asimismo, se ordenó la realización de diversas diligencias de investigación.

Finalmente, se ordenó la notificación de dicho acuerdo de admisión al *PAN*, así como a los diecinueve ciudadanos denunciantes.

II. Diligencias de investigación. Con el objeto de proveer lo conducente y para la debida integración del presente asunto, la autoridad instructora determinó requerir a los sujetos que se indican a continuación:

Acuerdo de 12 de junio de 2018 ²		
Sujeto	Oficio-Fecha de notificación	Oficio-Fecha de respuesta
<i>PAN</i>	INE-UT/9296/2018 ³ 13 de junio de 2018	RPAN-0397/2018 ⁴ 18 de junio de 2018
<i>DEPPP</i>	INE-UT/9297/2018 ⁵ 13 de junio de 2018	Correo electrónico de 14 de junio de 2018 ⁶

III. Emplazamiento.⁷ El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, se ordenó el emplazamiento al *PAN*, para el efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a las conductas que se le imputan y aportara los medios de prueba que considerara pertinentes.

¹ Visible a páginas 125-135 del expediente.

² Visible a páginas 125-135 del expediente.

³ Visible a página 144 del expediente.

⁴ Visible a página 170-176 y anexo de 177-331 del expediente.

⁵ Visible a página 138 del expediente.

⁶ Visible a páginas 147-148 del expediente.

⁷ Visible a páginas 350-358 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018

Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito. El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
PAN INE-UT/10133/2018 ⁸	Citatorio: 22 de junio de 2018 ⁹ Cédula: 25 de junio de 2018 ¹⁰ Plazo: 26 al 02 de julio de 2018	RPAN-0490/2018 ¹¹ 29 de junio de 2018

IV. Alegatos.¹² El cinco de julio de dos mil dieciocho se ordenó dar vista a las partes, a efecto de que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera.

El acuerdo de vista para alegatos, se diligenció en los siguientes términos:

Denunciado

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
PAN INE-UT/11213/2018 ¹³	Citatorio: 06 de julio de 2018. ¹⁴ Cédula: 09 de julio de 2018. ¹⁵ Plazo: 10 al 16 de julio de 2018.	Sin respuesta

Denunciantes

Nº	Quejosos – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
1	Estela Raquel Murillo Larios	Estrados: 02 de agosto de 2018 ¹⁶ Plazo: 03 al 09 de agosto de 2018.	Sin respuesta
2	Verónica Guzmán Mercado INE-JDE24-MEX/VE/VS/2394/18 ¹⁷	Cédula: 12 de julio de 2018. ¹⁸ Plazo: 13 al 19 de julio de 2018.	Sin respuesta
3	Karla Gretel Mendívil Quiñonez INE/07JDE/VE/0755/2018 ¹⁹	Cédula: 02 de agosto de 2018. ²⁰ Plazo: 03 al 09 de agosto de 2018.	Sin respuesta

⁸ Visible a página 367 del expediente.

⁹ Visible a páginas 368-372 del expediente.

¹⁰ Visible a páginas 373-374 del expediente.

¹¹ Visible a páginas 419-423 del expediente.

¹² Visible a páginas 431-435 del expediente.

¹³ Visible a página 183 del expediente.

¹⁴ Visible a páginas 184-188 del expediente.

¹⁵ Visible a páginas 189-190 del expediente.

¹⁶ Visible a página 656 del expediente.

¹⁷ Visible a página 500 del expediente.

¹⁸ Visible a página 501 del expediente.

¹⁹ Visible a página 614 del expediente.

²⁰ Visible a página 616 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018

N°	Quejosos – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
4	Ma. del Carmen Loera González INE/JDE02-ZAC/1468/2018 ²¹	Cédula: 23 de julio de 2018 ²² Plazo: 24 al 30 de julio de 2018	Sin respuesta
5	José Alejandro Aguillon Cauch	Estrados: 11 de julio de 2018. ²³ Plazo: 12 al 18 de julio de 2018.	Sin respuesta
6	Maricruz Negrete Solís INE/09JDE/VE/VS/1472/2018 ²⁴	Cédula: 23 de julio de 2018. ²⁵ Plazo: 24 al 30 de julio de 2018.	Sin respuesta
7	José Alberto Pérez Marrufo INE/JDE/02/VS/452/2018 ²⁶	Cédula: 11 de julio de 2018 ²⁷ Plazo: 12 al 18 de julio de 2018.	Sin respuesta
8	Francisco Javier Cervantes Germán INE/MICH/JDE05/VS/401/2018 ²⁸	Cédula: 09 de julio de 2018. ²⁹ Plazo: 10 al 16 de julio de 2018.	Sin respuesta
9	Gabriel Nouché Ramírez INE/JD11-VER/5024/2018 ³⁰	Cédula: 12 de julio de 2018. ³¹ Plazo: 13 al 19 de julio de 2018.	18/07/2018 ³²
10	Samuel Amezcua Peral INE/MICH/JDE04-VS/427/2018 ³³	Citatorio: 09 de julio de 2018. ³⁴ Cédula: 10 de julio de 2018. ³⁵ Plazo: 11 al 17 de julio de 2018.	Sin respuesta
11	Miriam Dolores Vidal Rita INE/18JDE-CM/02044/2018 ³⁶	Cédula: 07 de julio de 2018. ³⁷ Plazo: 09 al 13 de julio de 2018.	Sin respuesta
12	Feliciano Rosario Martínez INE/SLP/JD05/VS/186/2018 ³⁸	Cédula: 17 de julio de 2018. ³⁹ Plazo: 18 al 24 de julio de 2018.	Sin respuesta
13	Bianca Abigail Alarcón Zamora INE/JD06SIN/VE/2055/2018 ⁴⁰	Cédula: 16 de agosto de 2018 ⁴¹ Plazo: 17 al 23 de agosto de 2018.	Sin respuesta
14	Rosa Elena Prado Ocegueda INE/MICH/JDE05-VS/402/2018 ⁴²	Cédula: 09 de julio de 2018. ⁴³ Plazo: 10 al 16 de julio de 2018.	Sin respuesta

²¹ Visible a página 554 del expediente.

²² Visible a página 555 del expediente.

²³ Visible a páginas 622-624 del expediente.

²⁴ Visible a página 590 del expediente.

²⁵ Visible a página 591 del expediente.

²⁶ Visible a página 530 del expediente.

²⁷ Visible a página 531 del expediente.

²⁸ Visible a página 485 del expediente.

²⁹ Visible a página 486 del expediente.

³⁰ Visible a página 542 del expediente.

³¹ Visible a página 543 del expediente.

³² Visible a página 544 del expediente.

³³ Visible a página 473 del expediente.

³⁴ Visible a páginas 476-478 del expediente.

³⁵ Visible a páginas 474-475 del expediente.

³⁶ Visible a página 513 del expediente.

³⁷ Visible a página 514 del expediente.

³⁸ Visible a página 547 del expediente.

³⁹ Visible a páginas 548-549 del expediente.

⁴⁰ Visible a páginas 658-659 del expediente.

⁴¹ Visible a páginas 660-661 del expediente.

⁴² Visible a página 488 del expediente.

⁴³ Visible a páginas 234-235 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018

N°	Quejosos – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
15	Dulce Monserrat García de Alba Rodríguez INE-JAL-JDE13-VE-0436-2018 ⁴⁴	Cédula: 09 de julio de 2018. ⁴⁵ Plazo: 10 al 16 de julio de 2018.	Sin respuesta
16	Brenda Imelda Borbón Escalante INE/JD06SIN/VE/2055/2018 ⁴⁶	Estrados: 30 de julio de 2018. ⁴⁷ Plazo: 31 de julio al 06 de agosto de 2018	Sin respuesta
17	Claudia Rocío García Cano INE/MICH/JDE05-VS/403/2018 ⁴⁸	Cédula: 09 de julio de 2018. ⁴⁹ Plazo: 10 al 16 de julio de 2018.	Sin respuesta
18	Héctor León Aviña INE/MICH/JDE05-VS/404/2018 ⁵⁰	Cédula: 09 de julio de 2018. ⁵¹ Plazo: 10 al 16 de julio de 2018.	Sin respuesta
19	Karla Janinne Mendizábal Valdés INE/MICH/JDE05-VS/405/2018 ⁵²	Cédula: 09 de julio de 2018. ⁵³ Plazo: 10 al 16 de julio de 2018.	Sin respuesta

Es importante precisar que el *PAN* proporcionó copia certificada del formato de actualización⁵⁴ de datos de Karla Gretel Mendivil Quiñones⁵⁵ y Ma. Del Carmen Loera González,⁵⁶ con el objeto de acreditar la debida afiliación de las denunciantes; en ese sentido, la autoridad instructora determinó en el acuerdo de alegatos correr traslado con dichas constancias a las ciudadanas referidas.

V. Elaboración de proyecto. En su oportunidad, toda vez que no había diligencias pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la Comisión de Quejas y Denuncias.

VI. Sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias. En la Octogésima Cuarta Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el seis de septiembre de dos mil dieciocho, la *Comisión* aprobó el presente proyecto, en lo general por unanimidad de votos de sus integrantes, y en lo particular, por mayoría de dos votos

⁴⁴ Visible a página 663 del expediente.

⁴⁵ Visible a página 664 del expediente.

⁴⁶ Visible a páginas 658-659 del expediente.

⁴⁷ Visible a páginas 604-606 del expediente.

⁴⁸ Visible a página 494 del expediente.

⁴⁹ Visible a página 492 del expediente.

⁵⁰ Visible a página 491 del expediente.

⁵¹ Visible a página 234-235 del expediente.

⁵² Visible a página 482 del expediente.

⁵³ Visible a página 486 del expediente.

⁵⁴ Mediante acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, se ordenó requerir al *PAN* los formatos originales de los formatos de actualización. Visible a páginas 665-670 del expediente, sin que haya dado respuesta.

⁵⁵ Visible a páginas 143-150 del expediente.

⁵⁶ Visible a páginas 205-208 del expediente.

de la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela Herrera y del Consejero Electoral Benito Nacif Hernández, con el voto en contra de la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala Pérez, por cuanto a la individualización de la sanción, para su correspondiente discusión por el Consejo General, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión de Quejas y Denuncias, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte del *PAN*, en perjuicio de los ciudadanos que han sido señalados a lo largo de la presente determinación.

Ahora bien, conforme al artículo 23 del *COFIPE*, los partidos políticos ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en el citado Código, correspondiendo al Instituto Federal Electoral —hoy INE— vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n); y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018

las disposiciones contenidas en dicho Código, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38 del dispositivo legal en cita, las cuales son sancionables por el Consejo General.

Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443 párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la *LGIPE* y 25 de la *LGPP*, respectivamente.

En consecuencia, siendo atribución del *Consejo General* conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta competente para conocer y resolver respecto de las presuntas infracciones denunciadas en el procedimiento sancionador ordinario, atribuidas al *PAN*, derivado, esencialmente, de la afiliación indebida al citado instituto político.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,⁵⁷ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de ciudadanos.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIPE* —los cuales contienen reglas que ya se

⁵⁷ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

encontraban previstas en el *COFIPE*, en los artículos 342, párrafo 1, incisos a); 356, 361, 364, 365 y 366—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO

En el presente asunto se debe subrayar que algunas de las presuntas faltas (afiliación indebida) se cometieron **durante la vigencia del *COFIPE***, puesto que, en los casos de Estela Raquel Murillo Larios, Verónica Guzmán Mercado, Karla Gretel Mendívil Quiñonez, Ma. del Carmen Loera González, Maricruz Negrete Solís, José Alberto Pérez Marrufo, Francisco Javier Cervantes Germán, Samuel Amezcua Peral, Miriam Dolores Vidal Rita, Feliciano Rosario Martínez, Rosa Elena Prado Ocegueda, Dulce Monserrat García de Alba Rodríguez, Brenda Imelda Borbón Escalante y Karla Janinne Mendizábal Valdés, el registro o afiliación de los quejosos al **PAN** se realizó antes del treinta y uno de marzo de dos mil catorce.

En efecto, de conformidad con lo establecido en el Punto cuarto de los Lineamientos para la Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su registro, aprobados por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG617/2012, de treinta de agosto de dos mil doce, los Partidos Políticos Nacionales debían capturar en el *Sistema de Cómputo desarrollado por la Unidad Técnica de Servicios de Informática*, los datos de todos sus afiliados en el periodo comprendido **entre el uno de abril de dos mil trece y el treinta y uno de marzo de dos mil catorce**, siendo que precisamente el registro realizado en ese periodo corresponden las más recientes fechas de alta de los quejosos en el **PAN**.

Por tanto, si al momento de la comisión de las presuntas faltas se encontraba vigente el *COFIPE*,⁵⁸ es claro que este ordenamiento legal debe aplicarse para las cuestiones sustantivas del presente procedimiento, al margen que las faltas pudieran haber sido advertidas por los quejosos y cuestionadas

⁵⁸ El *COFIPE* estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce.

mediante las quejas que dieron origen al presente asunto, una vez que dicha norma fue abrogada por la *LGIFE*, así como que este último ordenamiento sea fundamento para cuestiones procesales o adjetivas.

No obstante, para los casos correspondientes a José Alejandro Aguillón Cauich, Gabriel Nouche Ramírez, Bianca Abigail Alarcón Zamora, Claudia Rocío García Cano y Héctor León Aviña, la normatividad aplicable será la *LGIFE*, toda vez que sus afiliaciones se realizaron durante la vigencia de este cuerpo normativo.

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO

1. LITIS

En el presente asunto se deberá determinar si el *PAN* afilió indebidamente o no a los ciudadanos que alegan no haber dado su consentimiento para estar en sus filas, y si violó el derecho de libertad de afiliación en su vertiente de no desafiliar a un ciudadano, haciendo para ello uso ilegítimo de su información personal, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIFE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*.

2. MARCO NORMATIVO

A) Constitución, tratados internacionales y ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

“Artículo 6

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

...

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de

organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.”

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la *Constitución*, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 de la *Constitución*— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafilarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 24/2002, emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro ***DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES***.⁵⁹

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

⁵⁹ Consultable en la página del *Tribunal Electoral* o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,⁶⁰ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a

⁶⁰ Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes — asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

“Artículo 23. Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:

I...

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y

- b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.”

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales publicada el treinta de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, inciso a) que era un requisito para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que, en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;

- Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
- Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGIFE*, que es obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su constitución y registro.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.
- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que, en

caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la *Constitución* y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los documentos necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna del PAN

Como se ha mencionado anteriormente, la obligación de los partidos políticos de garantizar el derecho de libre afiliación de sus agremiados, deviene de las propias disposiciones constitucionales, legales y convencionales a que se ha hecho referencia párrafos arriba, por tanto, su cumplimiento, en modo alguno, se encuentra sujeto a las disposiciones internas que cada instituto tiene en su haber normativo.

No obstante, a efecto de tener claridad acerca del proceso que un ciudadano debe llevar a cabo para convertirse en militante del partido político ahora denunciado, se

hace necesario analizar la norma interna del *PAN*, para lo cual, enseguida se transcribe la parte conducente de su Estatuto, en los términos siguientes:⁶¹

Estatuto del PAN

“Artículo 8

1. Son militantes del Partido Acción Nacional, los ciudadanos mexicanos que, de forma directa, personal, presencial, **individual, libre**, pacífica y voluntaria, **manifiesten su deseo de afiliarse**, asuman como propios los principios, fines, objetivos y documentos básicos del Partido Acción Nacional, y sean aceptados con tal carácter.

...

Artículo 9

1. El procedimiento de afiliación se regirá conforme a lo previsto en el Reglamento correspondiente. La solicitud **se presentará por escrito y podrá realizarse ante cualquier Comité del Partido de la entidad federativa correspondiente**, independientemente donde se encuentre su domicilio. Los mexicanos residentes en el extranjero, se podrán afiliar fuera del territorio nacional.

...

Artículo 10

1. Para ser militante, se requiere cumplir con los siguientes **requisitos**:

- a)** Ser ciudadano mexicano;
- b)** Tener un modo honesto de vivir;
- c)** Haber participado en la capacitación coordinada o avalada por el área correspondiente del Comité Ejecutivo Nacional;

d) Suscribir el formato aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional, acompañando copia de su credencial para votar con fotografía vigente, emitida por el Instituto Nacional Electoral; en el caso de mexicanos que residan en el extranjero, podrán acompañar copia de la matrícula consular.

...

Artículo 12

1. Son obligaciones de los militantes del Partido:

...

⁶¹ Consultable en la página de internet del *PAN*, o bien en la dirección electrónica: <http://actores-politicos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/nacionales/documentos-basicos/#!/pan>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018

g) Mantener sus datos actualizados en el Registro Nacional de Militantes, informando su cambio de domicilio, conforme a los datos registrados en el Instituto Nacional Electoral”

Reglamento de Militantes del Partido Acción Nacional⁶²

“Artículo 1. El presente ordenamiento es reglamentario de lo dispuesto en los artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 33 BIS numeral 1 fracciones I y II, 41, 49 y 128 numeral 2 de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, aprobados por la XVII Asamblea Nacional Extraordinaria.

Artículo 2. El presente Reglamento norma lo siguiente:

I. El procedimiento de afiliación, para el mantenimiento de la calidad de militante a fin de poder ejercer derechos; el procedimiento de actualización de datos; el procedimiento de aclaración y verificación de actividades; y el procedimiento de declaratoria de baja
...

Artículo 4. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:

...
XXI. REFRENDO. Manifestación de la voluntad del militante de continuar afiliado al Partido, mediante la realización de acciones o actividades electorales, comunitarias, políticas y de formación, registradas y verificables en la PLATAFORMA PAN, en los términos que señalen los Estatutos, Reglamentos y Acuerdos aplicables
...

Artículo 8. Toda ciudadana o ciudadano mexicano que desee afiliarse como militante al Partido, deberá hacerlo de forma individual, libre, pacífica, voluntaria, directa, presencial y personal; asumir como propios los Principios de Doctrina, fines y objetivos; así como los Programas de Acción Política, Plataformas políticas y electorales, Estatutos y Reglamentos.

Artículo 9. La militancia en el Partido inicia a partir de la aceptación por el Registro Nacional de Militantes, el que verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos por los Estatutos. Una vez aceptado, la fecha de inicio de la militancia será a partir de que la instancia competente hubiere recibido la solicitud de afiliación.
...

⁶² Consultable en la página de internet del PAN, o bien en la dirección electrónica: <http://actores-politicos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/nacionales/documentos-basicos/#!/pan>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018

Artículo 12. Toda ciudadana o ciudadano mexicano que desee afiliarse al Partido en los términos del Estatuto y el presente Reglamento, se sujetará al procedimiento siguiente:

I. Llenará el formato electrónico de inscripción en el portal del Registro Nacional de Militantes. La inscripción generará un folio que será utilizado por el militante para la inscripción en el Taller de Introducción al Partido;

II. Realizado el curso, reingresará al portal del Registro Nacional de Militantes para generar el formato de solicitud de afiliación, para lo cual deberá acudir de manera presencial y personal a cualquier Comité Directivo Municipal del Estado a que corresponda, o Comité Directivo Delegacional en el caso del Distrito Federal; o incluso a la respectiva sede del Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal;

III. El formato de solicitud de afiliación deberá acompañarse, al momento de la entrega, con fotocopias de los siguientes documentos, presentando los originales para cotejo:

a) Credencial para votar con fotografía vigente, expedida por la autoridad electoral nacional, para el efecto de acreditar la ciudadanía. Si dicha credencial no contiene el domicilio, el solicitante deberá anexar adicionalmente la copia de un comprobante de agua, luz, teléfono o gas, con una antigüedad no mayor a 4 meses, así como el original para cotejo; y

b) En su caso, copia de la renuncia a cualquier otro Partido Político en el que haya militado, presentada por lo menos seis meses antes de la fecha de solicitud de afiliación al Partido.

IV. El Comité Directivo receptor, a través de su Director de Afiliación, imprimirá la solicitud de afiliación y adjuntará en la PLATAFORMA PAN, la fotografía del solicitante, con los parámetros establecidos por el Registro Nacional de Militantes;

V. El órgano del Partido receptor de los documentos descritos en la fracción III, registrará y digitalizará, en la PLATAFORMA PAN, los datos contenidos en la solicitud del ciudadano, en un término máximo de 15 días naturales.

Los Directores de afiliación acreditados ante el Padrón Nacional de Estructuras, estarán facultados para hacer entrega personal o por correo certificado o mensajería especializada a la instancia correspondiente, de las solicitudes de afiliación que reciban, en un término máximo de 15 días naturales a partir de dicha recepción.

En el caso de que las estructuras municipales correspondientes no cuenten con los medios tecnológicos para llevar a cabo el procedimiento de adjuntar la documentación

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018

en la PLATAFORMA PAN, con independencia del registro de los datos del solicitante, remitirán la documentación al Director de Afiliación del Comité Directivo Estatal, dentro de los 10 días naturales a partir de que reciban las solicitudes de afiliación para su trámite conducente. Pasado este periodo, el solicitante deberá acudir al Comité Directivo Municipal receptor a efecto de obtener el comprobante impreso de su solicitud de afiliación; y

VI. El Director de afiliación receptor: recibirá, sellará y asentará su firma en el lugar establecido de la solicitud de afiliación, en caso de que se cumpla con los requisitos establecidos en el presente artículo; en caso contrario, prevendrá al solicitante y registrará, en la PLATAFORMA PAN, sus datos, así como la fecha y el motivo de la prevención.

...

Artículo 37. Es obligación de los militantes del Partido comunicar al Comité Directivo Municipal o Delegacional, Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal que les corresponda, o en forma directa al Registro Nacional de Militantes, mediante los formatos autorizados, el trámite de cambio de domicilio o actualización de datos de la Credencial para Votar con Fotografía expedida por el Registro Nacional de Electores, presentando copia de la nueva credencial.

...

Artículo 72. Los militantes causarán baja del Padrón por los siguientes motivos:

...

VIII. Falta de refrendo.”

De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente:

- El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, fundamentalmente, en la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para decidir **libre e individualmente** si desean formar parte de los partidos y agrupaciones políticas.
- Afiliado o militante es el ciudadano que libre, voluntaria e individualmente, acude a un partido político para solicitar su incorporación al padrón de militantes respectivo, a través de los documentos aprobados por los órganos partidistas correspondientes.
- Al *PAN* podrán afiliarse los ciudadanos que, libre e individualmente, expresen su voluntad de integrarse al partido.

- Para obtener la afiliación al partido de referencia, se requiere, además de ser ciudadano mexicano y expresar **su voluntad libre, individual y pacífica de afiliarse** al Partido, **suscribir personalmente** la solicitud de alta como militante.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán contemplar en sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos.
- Los militantes del *PAN* causarán baja del padrón de afiliados por falta de refrendo, entendiendo esto como la manifestación de la voluntad del militante de continuar afiliado al partido, mediante la realización de acciones o actividades electorales, comunitarias, políticas y de formación, registradas y verificables en la PLATAFORMA PAN, en los términos que señale el Estatuto, Reglamentos y Acuerdos aplicables.

D) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la *Constitución*, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

3. CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE VIOLACIÓN AL DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante del **PAN**, por regla general debe acudir a las instancias partidistas competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso del PAN), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del *COFIPE*, precepto que, derivado de la reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la *LGPP*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que además los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y voluntaria.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la *Sala Superior*, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**,⁶³ donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia 21/2013, de rubro **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,⁶⁴ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria⁶⁵ y como estándar probatorio.⁶⁶

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación⁶⁷ ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

⁶³ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

⁶⁴ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.

⁶⁵ Tesis de Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

⁶⁶ Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. Véase la nota 35.

⁶⁷ Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA**, **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO**.

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la *Sala Superior* consideró en la sentencia referida, que, para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciante sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con fundamento en el diverso 441 de la *LG/PE*, lo que implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento ordinario sancionador una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido,

sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberadamente la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

4. HECHOS ACREDITADOS Y PRECISIONES

Como se ha mencionado, las denuncias presentadas por los quejosos, versan sobre la supuesta violación a su derecho de libertad de afiliación, tanto en la modalidad de afiliación indebida de los ciudadanos como de no permitirles ser desafiliados del *PAN*, así como la utilización de sus datos personales por dicho partido político.

Ahora bien, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de la infracción denunciada, en los siguientes cuadros se resumirá, por cada uno de los denunciados, la información derivada de la investigación preliminar implementada, así como las conclusiones que, en cada caso, fueron advertidas:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP ⁶⁸	Manifestaciones del Partido Político RPAN-0397/2018 ⁶⁹
1	Estela Raquel Murillo Larios	11 de mayo de 2018 ⁷⁰ Aportó acuse de oficio de desconocimiento de afiliación dirigido al PAN. ⁷¹	Afiliada 03/03/2014	No registrada Baja del padrón: 15/11/2017
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante está registrada en el PAN. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
2	Verónica Guzmán Mercado	11 de mayo de 2018 ⁷² Aportó acuse de oficio de desconocimiento de afiliación dirigido al PAN. ⁷³	Afiliada 25/02/2014	No registrada Baja del padrón: 15/11/2017
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PAN. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
3	Karla Gretel Mendivil Quiñonez	08 de mayo de 2018 ⁷⁴ Aportó acuse de oficio de	Afiliada 22/01/2014	Registrada: 22/01/2014 Actualización: 02/06/2017

⁶⁸ Correo electrónico de 14 de junio de 2018, visible a página 147-148 del expediente, por el cual dio respuesta de los diecinueve ciudadanos que integran el procedimiento en que se actúa.

⁶⁹ Oficio RPAN-0397/2018 de 18 de junio de 2018. Visible a páginas 170-176 y anexo de 177-331 del expediente, por el cual dio respuesta de los diecinueve ciudadanos que integran el procedimiento en que se actúa.

⁷⁰ Visible a página 3 del expediente.

⁷¹ Visible a página 4 del expediente.

⁷² Visible a páginas 11-16 del expediente.

⁷³ Visible a página 21 del expediente.

⁷⁴ Visible a páginas 19-20 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
		desconocimiento de afiliación dirigido al PAN. ⁷⁵		El PAN remite copia certificada del formato de actualización de datos firmado por la quejosa. ⁷⁶
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante está registrada en el PAN.</p> <p>Es importante destacar, que el PAN no aportó la cédula de afiliación respectiva, ya que, según su dicho, el archivo muerto de dicho instituto político, existente hasta el 31 de diciembre de 2016, fue destruido, sin embargo, en el caso en particular, el partido político denunciado presentó copia certificada de formato de actualización de datos a nombre de la ciudadana de dos de junio de dos mil diecisiete.</p> <p>Esto es, el instituto político denunciado exhibió en el presente procedimiento, un documento que acredita que, con fecha anterior a la presentación del escrito de queja, la ciudadana hizo patente su voluntad de ser afiliada al PAN.</p> <p>Lo anterior resulta relevante, pues el PAN pretende demostrar la supuesta libre afiliación de la denunciante a partir de una constancia de la que, si bien se puede inferir manifestación de la voluntad de Karla Gretel Mendivil Quiñonez de pertenecer a dicho partido, lo cierto es que, dicha constancia, al haber sido suscrita el dos de junio de dos mil diecisiete, resulta insuficiente para acreditar que la militancia del quejoso se realizó de manera voluntaria.</p> <p>Es decir, la manifestación de Karla Gretel Mendivil Quiñonez –supuestamente otorgada el dos de junio de dos mil diecisiete- en modo alguno puede considerarse como base para presumir que la afiliación de dos mil catorce –que fue desconocida por la denunciante en su escrito inicial de queja- haya sido voluntaria.</p> <p>En consecuencia, la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
4	Ma. del Carmen Loera González	03 de mayo de 2018 ⁷⁷ Aportó acuse de oficio de desconocimiento de afiliación dirigido al PAN. ⁷⁸	Afiliada 24/01/2014	Registrada: 24/01/2014 Actualización: 21/06/2017 El PAN remite copia certificada del formato de actualización de datos firmado por la quejosa. ⁷⁹
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante está registrada en el PAN.</p> <p>Es importante destacar, que el PAN no aportó la cédula de afiliación respectiva, ya que el archivo muerto de dicho instituto político, existente hasta el 31 de diciembre de 2016, fue destruido, sin embargo, en el caso en particular, el partido político</p>				

⁷⁵ Visible a página 21 del expediente.

⁷⁶ Visible a página 201-204 del expediente.

⁷⁷ Visible a página 27 del expediente.

⁷⁸ Visible a página 28 del expediente.

⁷⁹ Visible a página 205-208 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
		<p>denunciado presentó copia certificada de formato de actualización de datos a nombre de la ciudadana de veintiuno de junio de dos mil diecisiete.</p> <p>Esto es, el instituto político denunciado exhibió en el presente procedimiento, un documento que acredita que, con fecha anterior a la presentación del escrito de queja, la ciudadana hizo patente su voluntad de ser afiliada al <i>PAN</i>.</p> <p>Lo anterior resulta relevante, pues el <i>PAN</i> pretende demostrar la supuesta libre afiliación de la denunciante a partir de una constancia de la que, si bien se puede inferir manifestación de la voluntad de Ma. del Carmen Loera González de pertenecer a dicho partido, lo cierto es que, dicha constancia, al haber sido suscrita el veintiuno de junio de dos mil diecisiete, resulta insuficiente para acreditar que la militancia del quejoso se realizó de manera voluntaria.</p> <p>Es decir, la manifestación de Ma. del Carmen Loera González –supuestamente otorgada el veintiuno de junio de dos mil diecisiete- en modo alguno puede considerarse como base para presumir que la afiliación de dos mil catorce –que fue desconocida por la denunciante en su escrito inicial de queja- haya sido voluntaria.</p> <p>En consecuencia, la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>		

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
5	José Alejandro Aguillon Cauich	11 de mayo de 2018 ⁸⁰ Aportó acuse de oficio de desconocimiento de afiliación dirigido al <i>PAN</i> . ⁸¹	Afiliado 09/06/2014	No registrado Baja del padrón: 15/11/2017
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del <i>PAN</i>. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
6	Maricruz Negrete Solís	09 de mayo de 2018 ⁸² Aportó acuse de oficio de desconocimiento de	Afiliada 30/06/1995	Registrada: 30/06/1995

⁸⁰ Visible a página 34 del expediente.

⁸¹ Visible a página 35 del expediente.

⁸² Visible a página 40 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
		afiliación dirigido al PAN. ⁸³		
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante está registrada en el PAN. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
7	José Alberto Pérez Marrufo	16 de mayo de 2018 ⁸⁴ Aportó acuse de oficio de desconocimiento de afiliación dirigido al PAN. ⁸⁵	Afiliado 01/06/1991	Registrado: 01/06/1991
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que el denunciante está registrado en el PAN. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
8	Francisco Javier Cervantes Germán	14 de mayo de 2018 ⁸⁶ Aportó acuse de oficio de desconocimiento de afiliación dirigido al PAN. ⁸⁷	Afiliado 24/01/2014	No registrado Baja del padrón: 15/11/2017
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del PAN. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p>				

⁸³ Visible a página 42 del expediente.

⁸⁴ Visible a página 48 del expediente.

⁸⁵ Visible a página 49 del expediente.

⁸⁶ Visible a página 53 del expediente.

⁸⁷ Visible a página 54 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida .				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
9	Gabriel Nouche Ramírez	10 de mayo de 2018 ⁸⁸	Afiliado 21/04/2014	No registrado Baja del padrón: 15/11/2017
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del PAN. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Finalmente, en el escrito por el cual formula alegatos, Gabriel Nouche Ramírez, manifiesta, esencialmente, lo siguiente: <i>...doy contestación a los alegatos que me han enviado con fecha del 14 de junio, donde se me ha notificado la indebida afiliación al Partido Acción Nacional, al cual no autorice para que mis datos fueran utilizados. La fecha en que me dieron de alta fue el 21 de abril de 2014, pido me den de baja de ese partido ya que lo anterior ha repercutido en mi trabajo en el INE como CAE (Capacitador Asistente Electoral).</i>⁸⁹</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
10	Samuel Amezcua Peral	22 de mayo de 2018 ⁹⁰ Aportó acuse de oficio de desconocimiento de afiliación dirigido al PAN ⁹¹	Afiliado 08/01/2014	No registrado Baja del padrón: 15/11/2017
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del PAN. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>				

⁸⁸ Visible a página 61 del expediente.

⁸⁹ Visible a página 544 del expediente.

⁹⁰ Visible a página 68 del expediente.

⁹¹ Visible a página 74 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
11	Miriam Dolores Vidal Rita	28 de mayo de 2018 ⁹² Aportó acuse de oficio de desconocimiento de afiliación dirigido al PAN. ⁹³	Afiliada 13/12/2013	No registrada Baja del padrón: 15/11/2017
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PAN. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
12	Feliciano Rosario Martínez	15 de mayo de 2018 ⁹⁴ Aportó copia simple de acuse de oficio de desconocimiento de afiliación dirigido al PAN y escrito original de constancia de no militancia firmado por el Director de afiliación de dicho instituto político.	Afiliado 29/07/2005	No registrado Baja del padrón: 15/11/2017
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente en el apartado denominado CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE VIOLACIÓN AL DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO, no existe controversia en el sentido de que el afectado fue militante del PAN.</p> <p>En el caso, se denunció una vulneración al derecho de libre afiliación en perjuicio del denunciante, en su modalidad de no hacerle efectivo su derecho de desafiliación.</p> <p>En el caso, el quejoso aduce que, en el año 2015, no realizó el trámite de refrendo de su afiliación.</p> <p>Lo anterior, toda vez que, en los anexos presentados con el escrito de queja, el ciudadano agregó original del acuse de escrito de desconocimiento de afiliación presentado al PAN el 15 de mayo de 2018, del que se desprende, en la parte que interesa, lo siguiente: <i>En el refrendo realizado por el Partido Acción Nacional en el año 2015 a nivel nacional, opté por tomar la decisión personal de ya no refrendarme; es decir no continuar como afiliado al PAN. Una vez manifestada dicha voluntad, tengo el conocimiento que el PAN da de baja automáticamente del padrón al ciudadano que no acudió al</i></p>				

⁹² Visible a página 76 del expediente.

⁹³ Visible a página 78 del expediente.

⁹⁴ Visible a página 82 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
		<p>refrendo. Para corroborar lo anterior, ingresé a la dirección electrónica [...] e ingresando mis datos personales VERIFIQUÉ QUE NO SOY AFILIADO AL PAN.⁹⁵</p> <p>A los anexos referidos con anterioridad, se agregó también la Constancia de no militancia del PAN, firmada por el Director de afiliación del partido denunciado, de 15 de mayo de 2018, por el cual le manifestó al quejoso lo siguiente: ... mediante la presente hace CONSTAR que una vez revisados los documentos físicos y electrónicos, manifiesto que el C. FELICIANO ROSARIO MARTÍNEZ, NO es MILITANTE de este instituto político, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.⁹⁶</p> <p>El PAN afirmó que el ciudadano estuvo afiliada a ese instituto político causando baja del padrón de militantes en fecha 15 de noviembre de 2017, en virtud de la aplicación del Programa Específico de revisión, verificación, actualización, depuración y registro de huellas digitales.</p> <p>Como se advierte, tanto el ciudadano como el PAN manifiestan que al no haber realizado el quejoso su refrendo de afiliación al instituto político denunciado en 2017, se procedió a su baja del padrón de militantes, tal y como lo establece el artículo 72, fracción VIII del Reglamento de Militantes de ese partido político.</p> <p>El PAN afirmó que dio de baja al ciudadano el 15 de noviembre de 2017.</p> <p>No obstante, de la información proporcionada por la DEPPP, se desprende que el quejoso aún continúa como afiliado al partido denunciado.</p> <p>En consecuencia, la conclusión debe ser que SÍ se actualiza una violación al derecho a la libre afiliación en su vertiente de no permitir a un ciudadano ser desafiliado.</p>		

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
13	Bianca Abigail Alarcón Zamora	25 de mayo de 2018 ⁹⁷ Aportó acuse de oficio de desconocimiento de afiliación dirigido al PAN. ⁹⁸	Afiliada 13/04/2015	No registrado Baja del padrón: 15/11/2017
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PAN. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>				

⁹⁵ Visible a página 84 del expediente.

⁹⁶ Visible a página 85 del expediente.

⁹⁷ Visible a página 88 del expediente.

⁹⁸ Visible a página 89 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
14	Rosa Elena Prado Ocegueda	29 de mayo de 2018 ⁹⁹ Aportó acuse de oficio de desconocimiento de afiliación dirigido al PAN. ¹⁰⁰	Afiliada 06/01/2014	No registrada Baja del padrón: 15/11/2017
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PAN. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
15	Dulce Monserrat García de Alba Rodríguez	24 de mayo de 2018 ¹⁰¹	Afiliada 10/02/2014	No registrada Baja del padrón: 15/11/2017
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PAN. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
16	Brenda Imelda Borbón Escalante	27 de abril de 2018 ¹⁰² Aportó acuse de oficio de desconocimiento de afiliación dirigido al PAN. ¹⁰³	Afiliada 28/04/1996	Registrada: 28/04/1996
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante está registrada en el PAN. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p>				

⁹⁹ Visible a página 93 del expediente.

¹⁰⁰ Visible a página 94 del expediente.

¹⁰¹ Visible a página 100 del expediente.

¹⁰² Visible a página 106 del expediente.

¹⁰³ Visible a página 108 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida .				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
17	Claudia Rocío García Cano	25 de mayo de 2018 ¹⁰⁴ Aportó acuse de oficio de desconocimiento de afiliación dirigido al PAN. ¹⁰⁵	Afiliada 03/08/2014	No registrada Baja del padrón: 15/11/2017
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PAN. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
18	Héctor León Aviña	25 de mayo de 2018 ¹⁰⁶ Aportó acuse de oficio de desconocimiento de afiliación dirigido al PAN. ¹⁰⁷	Afiliado 26/07/2014	No registrado Baja del padrón: 15/11/2017
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del PAN. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>				

¹⁰⁴ Visible a página 113 del expediente.

¹⁰⁵ Visible a página 114 del expediente.

¹⁰⁶ Visible a página 117 del expediente.

¹⁰⁷ Visible a página 118 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
19	Karla Janinne Mendizábal Valdés	25 de mayo de 2018 ¹⁰⁸ Aportó acuse de oficio de desconocimiento de afiliación dirigido al PAN. ¹⁰⁹	Afiliada 17/02/2014	No registrada Baja del padrón: 15/11/2017
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PAN. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>				

Lo anterior, se sintetiza en los siguientes cuadros:

DIECIOCHO CIUDADANOS

CIUDADANOS AFILIADOS INDEBIDAMENTE	
1	Estela Raquel Murillo Larios
3	Karla Gretel Mendivil Quiñonez
5	José Alejandro Cauich Aguillon
7	José Alberto Pérez Marrufo
9	Gabriel Nouche Ramírez
11	Miriam Dolores Vidal Rita
14	Rosa Elena Prado Ocegueda
16	Brenda Imelda Borbón Escalante
18	Héctor León Aviña

CIUDADANOS AFILIADOS INDEBIDAMENTE	
2	Verónica Guzmán Mercado
4	Ma. del Carmen Loera González
6	Maricruz Negrete Solís
8	Francisco Javier Cervantes Germán
10	Samuel Amezcua Peral
13	Bianca Abigail Alarcón Zamora
15	Dulce Monserrat García de Alba Rodríguez
17	Claudia Rocío García Cano
19	Karla Janinne Mendizábal Valdés

UN CIUDADANO

SÍ SE VIOLÓ SU DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN EN SU VERTIENTE DE NO PERMITIR A UN CIUDADANO SER DESAFILIADO	
12	Feliciano Rosario Martínez

Por lo que hace a las constancias aportadas por la DEPPP, al ser documentos emitidos por autoridades dentro del ámbito de sus facultades, se consideran

¹⁰⁸ Visible a página 121 del expediente.

¹⁰⁹ Visible a página 122 del expediente.

pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del Reglamento de Quejas y Denuncias del *INE*, mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la *LGIPE* y 27, párrafo 2 del Reglamento citado; por tanto, tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

En el mismo tenor, las documentales allegadas al expediente por el partido político denunciado, así como por los denunciantes, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracción II del Reglamento de Quejas y Denuncias del *INE*; por lo que, por sí mismas, carecen de valor probatorio pleno, y sólo alcanzarán ese grado cuando, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, generen convicción en este *Consejo General* sobre la veracidad de los hechos a que se refieren, ello al tenor de lo preceptuado en los artículos 462, párrafo 3 de la *LGIPE*, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención.

5. CASO CONCRETO

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por los quejosos, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5 del *COFIPE*, cuyo contenido se replica en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; esto es, partido político, candidato o inclusive cualquier persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el hecho

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018

ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

Ahora bien, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, la autoridad debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

En principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento que formula en contra de la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde al quejoso.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 de la *LGIPE*.

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que

contaba con el consentimiento de los quejosos para afiliarlos a su partido político, y no a los ciudadanos que negaron haber solicitado su inclusión en el padrón de militantes del PAN.

Así, como vimos, en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, está demostrado a partir de la información proporcionada por la *DEPPP* que los ciudadanos denunciados se encontraron, en ese momento, como afiliados del PAN.

Por otra parte, el PAN no demuestra con medios de prueba, que la afiliación respectiva sea el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de los ciudadanos, en los cuales, ellos mismos, *motu proprio*, expresaron su consentimiento y, por ende, proporcionaron sus datos personales a fin de llevar a cabo la afiliación a dicho instituto político.

Debiendo precisar que la carga de la prueba corresponde al PAN, en tanto que el dicho de los actores consiste en demostrar que no dieron su consentimiento para ser afiliados, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba; por lo que, la defensa del partido político consiste básicamente en afirmar que, si cumplieron las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación tienen el deber de probar esa situación.

Ahora bien, tal y como quedó de manifiesto en el apartado del *MARCO NORMATIVO* de la presente Resolución, así como en el correspondiente a *CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE VIOLACIÓN AL DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO*, la libertad de afiliación en materia político-electoral, es un derecho reconocido y así garantizado para todo ciudadano de nuestro país, al menos desde hace varias décadas, tanto a nivel constitucional como legal, el cual es concebido como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido político, permanecer afiliado a éste, desafiliarse e, incluso, no pertenecer a ninguno. Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección de datos personales e información relacionada con la vida privada de las personas, es igualmente un derecho con una trayectoria de protección por demás lejana.

En este sentido, es pertinente dejar en claro que la garantía y protección a los citados derechos, evidentemente no deriva de disposiciones reglamentarias al

interior de los institutos políticos, que prevean como obligación del partido político, la conservación de los expedientes de afiliación de cada miembro, ni tampoco a partir de la emisión de los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, emitidos por el propio *INE* en la Resolución CG617/2012, sino que, como se vio, el derecho tutelado deviene de disposiciones de rango supremo, el cual debe ser tutelado en todo momento, y no a partir de normas internas o reglamentarias que así lo establezcan.

En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos políticos es un derecho de los ciudadanos previsto como garantía constitucional en nuestro país desde hace décadas, también lo es la obligación de los partidos políticos de preservar, y en su caso, de demostrar, en todo momento, que cualquier acto que engendre la voluntad de un ciudadano para formar parte en las filas de un instituto político, esté amparado en el o los documentos que demuestren indefectiblemente el acto previo del consentimiento.

En este sentido, toda vez que los denunciantes manifiestan, en algunos casos, una afiliación indebida atribuible al *PAN* y, en el caso de **Feliciano Rosario Martínez**, por la omisión a darlo de baja de su padrón de afiliados, el estudio de fondo del presente asunto se realizará en distintos apartados:

Apartado A. Ciudadano sobre el que Sí se violó su derecho a la libre afiliación en su vertiente de no permitirle ser desafiliado

Respecto al ciudadano **Feliciano Rosario Martínez**, el presente procedimiento sancionador ordinario es **FUNDADO** en contra del *PAN*, por las razones y consideraciones siguientes:

De conformidad con lo asentado en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, está demostrado, a partir de la información proporcionada por la *DEPPP* y el propio instituto político denunciado, que el hoy quejoso se encuentra afiliado al *PAN*.

No obstante, **Feliciano Rosario Martínez**, se inconformó por la negativa del *PAN* de desincorporarlo de su padrón de militantes, aún y cuando no realizó el refrendo

correspondiente, en términos del Reglamento de Militantes de dicho instituto político, siendo esto una causal de baja de su padrón de afiliados.

Así, en términos de la información que obra en autos se advierte que:

1. No está a debate que, en algún momento, **Feliciano Rosario Martínez se afilió libre y voluntariamente al PAN**, con base en sus propias manifestaciones.
2. **Feliciano Rosario Martínez** manifestó que: “En el refrendo realizado por el Partido Acción Nacional en el año 2015 a nivel nacional, opté por tomar la decisión personal de ya no refrendarme; es decir no continuar como afiliado al PAN.”
3. El *PAN* informó que el quince de noviembre de dos mil diecisiete, dio de baja el registro del ciudadano como su militante.
4. El *PAN* emitió el quince de mayo de dos mil dieciocho una constancia de no militancia a favor de **Feliciano Rosario Martínez**, la cual fue anexada al escrito de queja en original.
5. Conforme a la información proporcionada por la *DEPPP*, **se advirtió que al catorce de junio de dos mil dieciocho, el quejoso apareció en el padrón de militantes del PAN con afiliación válida**, de conformidad con la información extraída del *Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos*, capturados por el propio partido político.

Con base en las anteriores conclusiones, esta autoridad considera que el partido incurrió en una violación al derecho de libertad de afiliación política, en su modalidad de **no permitir la desincorporación de este ciudadano como su militante**, en perjuicio del hoy quejoso, con motivo de la omisión o falta de cuidado en darlo de baja de su padrón de afiliados, al tratarse de una causal de baja, en términos de lo previsto en su propia normatividad, específicamente lo establecido en el artículo 72, fracción VIII del Reglamento de Militantes del *PAN*.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018

En efecto, tal y como se ha referido en el apartado de marco normativo de la presente Resolución, todo ciudadano mexicano tiene derecho a asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III y 41, párrafo segundo Bases I, párrafo segundo *in fine*, y IV, de la *Constitución*, así como en el diverso 3, párrafo 2, de la *LGPP*.

Así, en ejercicio del derecho de asociación en materia político-electoral, los ciudadanos pueden formar partidos y agrupaciones políticas, cumpliendo para ello con los requisitos que establece la ley.

En este contexto, la libertad de asociación política constituye la base de la formación de los partidos, de manera que, en ejercicio de esa potestad, todo ciudadano, por igual, puede formar parte de ellos bajo la condición de cumplir con los requisitos que establece la norma, pudiendo también, en consonancia con esa libertad, tener la posibilidad de **desafilarse** de éste en el momento que así lo desee.

Con base en ello, se considera que existirá violación a la libertad de afiliación, por parte de un partido político, cuando sin mediar justificación alguna, mantiene en contra de su voluntad a un ciudadano dentro de su padrón de afiliados, toda vez que dichas personas morales, en su calidad de entidades de interés público, en términos del numeral 41, Base I, de la *Constitución* tienen el deber irrestricto de garantizar el libre ejercicio de derechos fundamentales de todos los ciudadanos, entre ellos, los relativos a la libertad de afiliación política y, al no actuar de esta forma, evidentemente afecta su esfera jurídica, al relacionarlos con una fuerza política a la que ya no quieren pertenecer, siendo que su derecho a terminar el vínculo que los unía con el partido se vio afectado.

Como se mencionó, conforme a lo establecido en el artículo 72, fracción VIII del Reglamento de Militantes del *PAN*, los militantes causarán baja del padrón, entre otros motivos, por la falta de refrendo de su afiliación, entendiendo el refrendo como la manifestación de la voluntad del militante de continuar afiliado al Partido, mediante la realización de acciones o actividades electorales, comunitarias, políticas y de formación, registradas y verificables en la plataforma *PAN*, en los términos que señalen los Estatutos, Reglamentos y Acuerdos aplicable,

circunstancia que, en el caso en estudio, no se actualizó al no haber realizado Feliciano Rosario Martínez los actos tendentes a su refrendo de afiliación al instituto político denunciado.

Es importante señalar que el *PAN* argumentó que el registro de afiliación del ciudadano fue cancelado el quince de noviembre de dos mil diecisiete, en razón de que al no haber realizado el quejoso su refrendo de afiliación al instituto político denunciado en dos mil diecisiete, se procedió a su baja del padrón de militantes, tal y como lo establece el artículo 72, fracción VIII del Reglamento de Militantes de ese partido político.

Es decir, el *PAN* reconoce que se actualizó una causal de baja de militancia de la ciudadana al no haber refrendado su afiliación, esto es, existe una confesional por parte de dicho instituto político que cobra relevancia al caso, porque corrobora de una manera indirecta que el registro del quejoso debió ser dado de baja como afiliado del partido político denunciado.

Además, es importante destacar que el quejoso aportó constancia de no militancia original firmada por el Director de Afiliación del partido político denunciado, de fecha quince de mayo de dos mil dieciocho, por la cual le manifestó al quejoso lo siguiente: *... mediante la presente hace **CONSTAR** que una vez revisados los documentos físicos y electrónicos, manifiesto que el **C. FELICIANO ROSARIO MARTÍNEZ, NO es MILITANTE** de este instituto político, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.*¹¹⁰

Esto es, no obstante que el partido político denunciado hizo constar que, en esa fecha quince de mayo de dos mil dieciocho, el ciudadano quejoso no era militante de dicho instituto político, lo cierto es que al catorce de junio de dos mil dieciocho, el mismo continuaba registrado en su padrón de afiliados, lo que evidencia la omisión en que incurrió el *PAN* al no desafiliar o cancelar el registro de **Feliciano Rosario Martínez**, de manera pronta u oportuna.

Así, se considera que el presente procedimiento debe declararse **FUNDADO**, lo anterior, porque el partido político denunciado no manifestó ni mucho menos

¹¹⁰ Visible a página 85 del expediente.

acreditó la causa, motivo o razón por la cual mantiene a **Feliciano Rosario Martínez** dentro de un padrón de afiliados, que, como se refirió, en términos de su normativa interna la falta de refrendo de afiliación es causa de baja de dicho padrón de militantes.

Lo anterior es así, toda vez que, como ya se anunció, al tratarse de un ente de interés público, está obligado, entre otras cosas, a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; al tenor de lo dispuesto en el inciso a) del párrafo 1, del artículo 25 de la *LGPP*.

En este sentido y de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales que le son aplicables, el *PAN*, debió garantizar el ejercicio fundamental de libre afiliación política, en todas sus vertientes, incluida por supuesto el de desafiliación de sus agremiados, razón por la cual no puede constituir una justificación el que se argumente que no se hayan cumplido con el proceso interno de dicho instituto político, siendo que ni siquiera, acreditó que el ciudadano de referencia estuvo en condiciones de imponerse ante el mismo, en los términos ya apuntados.

La anterior conclusión tiene sustento en la Tesis de Jurisprudencia **29/2002**,¹¹¹ cuyo rubro y texto es al tenor literal siguiente:

“DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA.

Interpretar en forma restrictiva los derechos subjetivos públicos fundamentales de asociación en materia política y de afiliación política electoral consagrados constitucionalmente, implicaría desconocer los valores tutelados por las normas constitucionales que los consagran, así cabe hacer una interpretación con un criterio extensivo, toda vez que no se trata de una excepción o de un privilegio, sino de derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados, no restringidos ni mucho menos suprimidos. En efecto, los derechos fundamentales de carácter político-electoral consagrados constitucionalmente, como los derechos de votar, ser votado, de asociación y de afiliación, con todas las facultades inherentes a tales derechos, tienen como principal fundamento promover la democracia

¹¹¹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=29/2002&tpoBusqueda=S&sWord=29/2002>

representativa, habida cuenta que, conforme con lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa y democrática. Lo anterior, en virtud de que las reglas interpretativas que rigen la determinación del sentido y alcances jurídicos de una norma no permiten que se restrinja o haga nugatorio el ejercicio de un derecho fundamental, como lo son los de asociación política y de afiliación político-electoral; por el contrario, toda interpretación y la correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus alcances jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que aquélla esté relacionada con un derecho fundamental. Lo anterior, desde luego, no significa en forma alguna sostener que los derechos fundamentales de carácter político sean derechos absolutos o ilimitados.”

Por tanto, se concluye que el derecho fundamental de desafiliación, en el caso, por falta de refrendo de afiliación del denunciante, debió ser garantizado por el *PAN*, habida cuenta que su goce y ejercicio no es una prerrogativa cuya disponibilidad quede a cargo del partido político denunciado, sino exclusivamente de los ciudadanos.

Sirve de apoyo a los anteriores argumentos, lo establecido en la Tesis de Jurisprudencia **24/2002**,¹¹² del *Tribunal Electoral*, de rubro y texto siguientes:

“DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES.- El derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 5o., párrafos 1 y 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas, y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios y, por tanto, con mayor especificidad que el derecho de asociación y está garantizado jurisdiccionalmente mediante el sistema de medios de impugnación en materia electoral previsto en el artículo 41, fracción IV, primer párrafo, in fine, en relación con lo dispuesto en el artículo

¹¹² Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018

99, fracción V, de la Constitución federal. Además, el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también la prerrogativa de pertenecer a éstos con todos los derechos inherentes a tal pertenencia; en particular, el derecho fundamental de afiliación político-electoral consagrado constitucionalmente faculta a su titular para afiliarse o no libremente a un determinado partido político, conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.”

A fin de dar mayor claridad a la presente Resolución, enseguida se esquematiza el tiempo transcurrido entre la fecha en que el hoy denunciante no realizó el refrendo de afiliación correspondiente, y en el momento que se presentó la queja que dio origen al presente asunto.

Quejoso	Queja	Fecha en que se debió refrendar la afiliación	Tiempo transcurrido entre la falta de refrendo de afiliación y la presentación de la queja
Feliciano Rosario Martínez	15 de mayo de 2018 ¹¹³	2015	3 años aproximadamente

Por lo anterior, este órgano colegiado considera pertinente declarar **fundado** el presente procedimiento, por lo que hace al presente apartado, pues se concluye que el *PAN* infringió las disposiciones electorales al no desafiliar a **Feliciano Rosario Martínez**, con motivo de la actualización de una causal de baja de su padrón de afiliados en términos de su propio Reglamento de Militantes, violentando así su derecho de afiliación política, en su modalidad de no hacer efectiva su desafiliación, aunado a que para tal fin, utilizó sus datos personales de forma indebida.

Con base en lo expuesto, con independencia de las razones expuestas en los párrafos que preceden, esta autoridad debe privilegiar y garantizar el derecho de libertad de desafiliación en favor del denunciante que constituye este apartado,

¹¹³ Visible a página 82 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018

debiendo sancionar al partido por la conducta que se declaró fundada, a efecto de evitar en casos futuros la repetición de conductas con la que nos ocupa.

En consecuencia, al determinarse que el *PAN* infringió la norma electoral ya señalada, se declara **fundado** el presente procedimiento, por cuanto hace a la omisión de desafiliar a **Feliciano Rosario Martínez**, con motivo de la actualización de la causal de baja de su padrón de afiliados, en términos de lo previsto en la fracción VIII del artículo 72 del Reglamento de Militantes del *PAN*, así como por el uso indebido de sus datos personales.

Por tanto, es de concluirse que, respecto a **Feliciano Rosario Martínez**, el *PAN* **Sí violó el derecho de libre afiliación del quejoso, en la modalidad de su derecho de desafiliación.**

Apartado B. Ciudadanos que fueron afiliados indebidamente al *PAN*

Respecto a los **dieciocho (18) ciudadanos** que se citan a continuación, el presente procedimiento sancionador ordinario es **FUNDADO** en contra del *PAN*, por las razones y consideraciones siguientes:

CIUDADANOS AFILIADOS INDEBIDAMENTE	
1	Estela Raquel Murillo Larios
3	Karla Gretel Mendivil Quiñonez
5	José Alejandro Cauich Aguillon
7	José Alberto Pérez Marrufo
9	Gabriel Nouche Ramírez
11	Miriam Dolores Vidal Rita
14	Rosa Elena Prado Ocegueda
16	Brenda Imelda Borbón Escalante
18	Héctor León Aviña

CIUDADANOS AFILIADOS INDEBIDAMENTE	
2	Verónica Guzmán Mercado
4	Ma. del Carmen Loera González
6	Maricruz Negrete Solís
8	Francisco Javier Cervantes Germán
10	Samuel Amezcua Peral
13	Bianca Abigail Alarcón Zamora
15	Dulce Monserrat García de Alba Rodríguez
17	Claudia Rocío García Cano
19	Karla Janinne Mendizábal Valdés

Es importante señalar que el *PAN* **reconoció la afiliación y vigencia de registro** de militancia de los cinco (5) ciudadanos Karla Gretel Mendivil Quiñonez, Ma. del Carmen Loera González Maricruz Negrete Solís, Brenda Imelda Borbón Escalante y José Alberto Pérez Marrufo.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018

No obstante, lo anterior, en ningún caso aportó las cédulas correspondientes, a fin de acreditar ante esta autoridad que el registro de los mismos aconteció de forma libre, individual, voluntaria, personal y pacífica y que además para llevar a cabo ese trámite se cumplió con los requisitos establecidos para tal efecto en su normatividad interna.

En efecto, se considera que, en el caso, el medio de prueba esencial para acreditar la debida afiliación de esos ciudadanos es la cédula o, en su caso, cualquier otra documentación establecida en la normatividad del *PAN* en materia de afiliación, en la que constará el deseo de los ciudadanos a afiliarse a ese partido político, al estar impresa de su puño y letra, el nombre, firma, domicilio y datos de identificación, circunstancia que no aconteció, tal y como se estableció en párrafos precedentes.

En el caso de las ciudadanas Karla Gretel Mendívil Quiñonez y Ma. del Carmen Loera González Maricruz Negrete Solís, si bien el partido político denunciado presentó copia certificada de formatos de actualización de datos de militante del año dos mil diecisiete, lo cierto es que tal documentación es insuficiente para desvirtuar la infracción que se le atribuye.

En efecto, si bien dicho partido político aportó sendas documentales en las que supuestamente aparecen la respectiva manifestación de Karla Gretel Mendívil Quiñonez y Ma. del Carmen Loera González Maricruz Negrete Solís, de mantenerse afiliado a ese instituto, lo cierto es que, por la fecha de elaboración de esas constancias —**dos y veintiuno de junio de dos mil diecisiete**, respectivamente— resultan insuficientes por sí mismas, para acreditar una militancia que, según las constancias del expediente, datan desde el **veintidós y veinticuatro de enero de dos mil catorce**.

En otras palabras, la afiliación indebida que, respecto de Karla Gretel Mendívil Quiñonez y Ma. del Carmen Loera González Maricruz Negrete Solís se atribuye al *PAN*, corresponde al año dos mil catorce, por lo que, los documentos en los que se asienta que las quejas actualizan sus datos como militantes de ese partido, y que corresponden al año dos mil diecisiete, en modo alguno desvirtúan la imputación.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018

Criterio similar sostuvo este *Consejo General* en la resolución INE/CG1198/2018,¹¹⁴ de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/MPCA/JD01/SIN/109/2018.

Por otra parte, esta autoridad no desconoce que el partido político denunciado manifestó en su escrito de desahogo de alegatos que realizó una destrucción de “archivo muerto” en el año 2016, pero ello tampoco puede constituir una excluyente de responsabilidad para el *PAN*.

En efecto, como se sostuvo en el subapartado en el que se establecieron consideraciones acerca de la Carga y el Estándar probatorio, el partido político tenía la obligación de resguardar constancias con las que pudiera acreditar que los ciudadanos que han sido afiliados a ese ente político lo han realizado previa manifestación de su deseo de hacerlo.

En el caso, el partido político denunciado no exhibe constancia alguna de la que se pueda corroborar, de manera fehaciente, que dentro del “archivo muerto”, cuya destrucción se ordenó por ese instituto político en 2016, se hayan incluido, precisamente, las constancias con las que se hubiera podido acreditar la afiliación indebida que se le imputa.

En síntesis, a partir de las constancias que obran en autos, se tiene acreditado que el *PAN* vulneró el derecho de libertad de afiliación —utilizando indebidamente datos personales—, respecto de las ciudadanas Karla Gretel Mendívil Quiñonez y Ma. del Carmen Loera González Maricruz Negrete Solís, afiliándolas de manera indebida el veintidós y veinticuatro de enero de dos mil catorce.

Criterio similar sostuvo este *Consejo General* en la resolución INE/CG119/2018,¹¹⁵ de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/ERS/CG/33/2017.

¹¹⁴ Consultable en la página de internet del *INE*, o bien en la dirección electrónica: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98225/CGor20180823-rp-16-22.pdf>

¹¹⁵ Consultable en la página de internet del *INE*, o bien en la dirección electrónica: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95142/CGor201802-28-rp-11-3.pdf>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018

Respecto a los trece (13) ciudadanos que se citan a continuación, el **PAN argumentó que dichos ciudadanos han sido dados de baja del registro de militantes**, es decir, el partido político denunciado reconoce la afiliación de los ciudadanos, esto es, existe una confesional por parte de dicho instituto político que cobra relevancia al caso, porque corrobora de una manera indirecta que los quejosos fueron registrados en su padrón de militantes.

CIUDADANOS AFILIADOS INDEBIDAMENTE	
1	Estela Raquel Murillo Larios
5	José Alejandro Cauich Aguillon
9	Gabriel Nouche Ramírez
11	Miriam Dolores Vidal Rita
14	Rosa Elena Prado Ocegueda
17	Claudia Rocío García Cano
19	Karla Janinne Mendizábal Valdés

CIUDADANOS AFILIADOS INDEBIDAMENTE	
2	Verónica Guzmán Mercado
8	Francisco Javier Cervantes Germán
10	Samuel Amezcua Peral
13	Bianca Abigail Alarcón Zamora
15	Dulce Monserrat García de Alba Rodríguez
18	Héctor León Aviña

No obstante, lo anterior, dicho argumento resulta ser intrascendente en el presente asunto, ya que en ningún caso el *PAN* aportó la documentación que acredite la afiliación libre, individual, voluntaria, personal y pacífica de tales sujetos, en los términos establecidos en su normatividad interna.

Es decir, el registro de esos trece (13) ciudadanos por parte del *PAN* en su padrón de militantes no está controvertido, ni tampoco la circunstancia de que, a la fecha, sigan manteniendo o no su registro en dicho instituto político, sino lo que, en el caso se debe determinar si esa afiliación se llevó a cabo o no de forma libre, individual, voluntaria, personal y pacífica.

Sobre esto último, como se ha establecido, se considera que la cédula o solicitud de afiliación es el documento idóneo para acreditar la libre afiliación, lo cual no fue acreditado por el *PAN*.

Finalmente, es de referir que, de las diligencias de investigación practicadas en el presente procedimiento, se advierte que la *DEPPP*, órgano central del *INE* encargado de la concentración de los padrones de los diversos partidos nacionales, así como de la verificación de los mismos, encontró a esos trece ciudadanos, registrados como militantes del *PAN*.

En mérito de lo anterior, existe evidencia que hace suponer que la afiliación a la que se refiere en este apartado, fue producto de una acción ilegal por parte del *PAN*.

Por lo anterior, este órgano colegiado considera pertinente declarar **FUNDADO** el presente procedimiento, pues se concluye que el *PAN* infringió las disposiciones electorales tendentes a demostrar la libre afiliación de los **dieciocho (18) ciudadanos** antes referidos, quienes aparecieron como afiliados a dicho instituto político, por no demostrar el acto volitivo de éstos para permanecer agremiados a ese partido.

En efecto, como se demostró anteriormente, los denunciantes que aparecieron afiliados al *PAN*, manifestaron que en momento alguno otorgaron su consentimiento para ello, siendo que dicho instituto político no demostró lo contrario, por lo que se actualiza la violación al derecho fundamental de libre afiliación garantizado desde la *Constitución* y la ley, según se expuso.

Al respecto, es importante destacar, en lo que interesa, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada el seis de junio de dos mil dieciocho, al resolver el medio de impugnación con clave SUP-RAP 141/2018:¹¹⁶

“...si los ciudadanos referidos alegaron que no dieron su consentimiento para pertenecer al partido político recurrente, implícitamente sostienen que no existe la constancia de afiliación atinente; por tanto, los ciudadanos no estaban obligados a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba tampoco son objeto de demostración los hechos negativos, salvo que envuelvan una afirmación.”¹¹⁷

Esto es, en el tema que nos ocupa, conforme a lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada en el medio de impugnación SUP-RAP 141/2018, la carga probatoria corresponde a los partidos políticos, en el caso al *PAN*, ente político que *se encuentra obligado a demostrar que la solicitud de ingreso al partido fue*

¹¹⁶ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_judicial/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0141-2018.pdf

¹¹⁷ De conformidad con los numerales 461 de la *Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales*, en relación el diverso 441 de ese ordenamiento y 15, segundo párrafo, de la *Ley de Medios*

voluntaria, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad o, en su caso, también tenía la posibilidad de probar sus afirmaciones a través de otros medios de prueba como lo serían documentales que justificaran la participación voluntaria de dichas personas en la vida interna del partido y con carácter de militante, como lo serían, por ejemplo, documentales que evidenciaran el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas, el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras,¹¹⁸ circunstancia que, en el particular no aconteció.

Así pues, el *PAN*, en los **dieciocho (18)** casos analizados, no demostró que las afiliaciones se realizaron a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que dichos ciudadanos hayan dado su consentimiento para ser afiliados, ni mucho menos que hayan permitido o entregado datos personales para ese fin, los cuales se estiman necesarios para procesar las afiliaciones, dado que estos elementos se constituyen como insumos obligados para, en su momento, llevar a cabo una afiliación, de ahí que esto sea necesario e inescindible.

Con base en ello, ante la negativa de los denunciantes de haberse afiliado al *PAN*, correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de pruebas idóneas, que la afiliación se llevó a cabo a través de los mecanismos legales para ello, en donde constara fehacientemente la libre voluntad de los hoy promoventes, lo que no hizo, siendo que el solo hecho de aparecer en su registro electrónico es insuficiente para acreditar el ejercicio libre, personal y voluntario del derecho de afiliación a dicho instituto político.

Es decir, no basta con que los quejosos aparezcan como afiliados al *PAN* en sus registros electrónicos, sino que dicho instituto político debió demostrar, con documentación soporte o pruebas idóneas, que dichas afiliaciones se realizaron de forma libre o voluntaria, o bien, que la aparición del nombre y datos de los quejosos en su padrón de militantes, fue consecuencia de un error involuntario o de alguna circunstancia diversa, pero no lo hizo.

¹¹⁸ Criterio sostenido en la sentencia dictada en el medio de impugnación SUP-RAP 141/2018.

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación al *PAN* implica, además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que pudiera haber servido de base o justificación al partido político para afiliar a los ahora quejosos.

Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales, tiene íntima vinculación con la afiliación indebida de los **dieciocho (18)** quejosos sobre los que se declara fundado el presente procedimiento, lo cual ya quedó debidamente acreditado y, como consecuencia de ello, merece la imposición de las sanciones que se determinarán en el apartado correspondiente.

Cabe referir que a similar conclusión arribó este *Consejo General* en la resolución INE/CG120/2018, de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/ALC/CG/39/2017, así como en la resolución INE/CG448/2018, de once de mayo de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2017, las cuales fueron confirmadas por el *Tribunal Electoral* al dictar sentencia el veinticinco de abril y once de mayo de dos mil dieciocho, en los medios de impugnación con clave SUP-RAP-047/2018¹¹⁹ y SUP-RAP-137/2018,¹²⁰ respectivamente, derivado de una falta de la misma naturaleza a la que aquí se estudia, en donde se determinó que el uso de datos personales poseía un carácter intrínseco o elemento esencial para la configuración de una afiliación indebida.

CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de las faltas denunciadas, así como la responsabilidad por parte del **PAN**, en los casos detallados en el considerando que antecede, procede ahora determinar la sanción

¹¹⁹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0047-2018.pdf

¹²⁰ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0137-2018.pdf

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018

correspondiente, en atención a lo dispuesto en el artículo 355, párrafo 5 del *COFIPE*, cuyo contenido se reproduce en el diverso 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, relativo a la gravedad de la responsabilidad en que se incurra; el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; y, en su caso, la reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.

En relación con ello, el *Tribunal Electoral* ha sostenido que para individualizar la sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción electoral.

1. Calificación de la falta

A. Tipo de infracción

Partido	Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
PAN	La infracción se cometió por acción y omisión del partido político denunciado, que transgrede disposiciones de la <i>Constitución</i> , del <i>COFIPE</i> , en el momento de su comisión, así como de la <i>LGIPE</i> y la <i>LGPP</i> .	La conducta fue la afiliación indebida y el uso no autorizado de los datos personales de dieciocho (18) ciudadanos por parte del PAN , así como la omisión de cancelar el registro de un ciudadano .	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la <i>Constitución</i> ; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del <i>COFIPE</i> ; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la <i>LGIPE</i> ; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la <i>LGPP</i> .

B. Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o prohibidas.

En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el particular, se acreditó que el **PAN** incluyó indebidamente en su padrón de afiliados a los **diecinueve (19)** ciudadanos quejosos, en el caso de **Feliciano Rosario Martínez, por la omisión de cancelar su registro de militante**, violentando con ello la norma electoral, en específico las disposiciones precisadas en el recuadro inserto en el subapartado previo.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de los ciudadanos mexicanos, de optar libremente por ser o no militante de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, efectivamente consintieron libremente en ser sus agremiados.

Por otra parte, como se analizó, para la afiliación indebida acreditada en el expediente que se resuelve se usaron los datos personales de los promoventes sin que éstos hubiesen otorgado su consentimiento para ello, lo cual, constituye un elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida.

En efecto, si bien es cierto, a partir de las constancias que obran en autos no está demostrado que los datos personales hubieran sido utilizados con un propósito diverso a la afiliación indebida en sí misma, o bien su difusión frente a terceros, lo

es también que dicha información fue necesaria para materializar la incorporación de los datos de los actores al padrón de militantes del partido político denunciado.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo argumentado en la sentencia de siete de junio de dos mil dieciocho dictada por la Sala Superior al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-141/2018,¹²¹ en la que se estableció, en lo que interesa sobre el tema, lo siguiente:

“...los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de un ciudadano pertenecer a un partido político, no puede alegar que existe uso indebido de sus datos personales porque se consideran públicos.

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban pertenecer.”

De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción correspondiente al **PAN**.

C. Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que el **PAN** transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la normativa interna del instituto partido político, y que, tal infracción se cometió en detrimento de los derechos de más de un ciudadano, esta situación no conlleva estar en presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de afiliación a los institutos políticos, quien incluyó en su padrón de militantes a los hoy quejosos, sin demostrar el consentimiento previo para ello.

¹²¹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0141-2018.pdf

Cabe precisar que, en apartados subsecuentes, se analizará a detalle el impacto que tuvo dicha infracción en atención al número de personas afiliadas indebidamente.

D. Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

- a) **Modo.** En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles al **PAN**, consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la *Constitución*; así como 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e) del *COFIPE* disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIFE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*, por lo siguiente:

- **Al incluir en su padrón de afiliados a los dieciocho (18) ciudadanos siguientes:**

CIUDADANOS AFILIADOS INDEBIDAMENTE	
1	Estela Raquel Murillo Larios
3	Karla Gretel Mendivil Quiñonez
5	José Alejandro Cauich Aguillon
7	José Alberto Pérez Marrufo
9	Gabriel Nouche Ramírez
11	Miriam Dolores Vidal Rita
14	Rosa Elena Prado Ocegueda
16	Brenda Imelda Borbón Escalante
18	Héctor León Aviña

CIUDADANOS AFILIADOS INDEBIDAMENTE	
2	Verónica Guzmán Mercado
4	Ma. del Carmen Loera González
6	Maricruz Negrete Solís
8	Francisco Javier Cervantes Germán
10	Samuel Amezcua Peral
13	Bianca Abigail Alarcón Zamora
15	Dulce Monserrat García de Alba Rodríguez
17	Claudia Rocío García Cano
19	Karla Janinne Mendizábal Valdés

- En el caso de **Feliciano Rosario Martínez**, al mantener su registro de militante en contra su voluntad, tal y como se advirtió a lo largo de la presente Resolución de forma pormenorizada.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018

b) Tiempo. En el caso concreto, como se razonó en el considerando que antecede, las infracciones cometidas por el *PAN*, se realizaron conforme a lo siguiente:

▪ **Afiliación indebida**

No.	Nombre del quejoso	Fecha de Afiliación proporcionada por la DEPPP	Afiliado
1	Estela Raquel Murillo Larios	03/03/2014	Sí
2	Verónica Guzmán Mercado	25/02/2014	Sí
3	Karla Gretel Mendívil Quiñonez	22/01/2014	Sí
4	Ma. del Carmen Loera González	24/01/2014	Sí
5	José Alejandro Aguillon Cauich	09/06/2014	Sí
6	Maricruz Negrete Solís	30/06/1995	Sí
7	José Alberto Pérez Marrufo	01/06/1991	Sí
8	Francisco Javier Cervantes Germán	24/01/2014	Sí
9	Gabriel Nouche Ramírez	21/04/2014	Sí
10	Samuel Amezcua Peral	08/01/2014	Sí
11	Miriam Dolores Vidal Rita	13/12/2013	Sí
12	Feliciano Rosario Martínez	29/07/2005	Sí
13	Bianca Abigail Alarcón Zamora	13/04/2015	Sí
14	Rosa Elena Prado Ocegueda	06/01/2014	Sí
15	Dulce Monserrat García de Alba Rodríguez	10/02/2014	Sí
16	Brenda Imelda Borbón Escalante	28/04/1996	Sí
17	Claudia Rocío García Cano	03/08/2014	Sí
18	Héctor León Aviña	26/07/2014	Sí
19	Karla Janinne Mendizábal Valdés	17/02/2014	Sí

▪ **Omisión de cancelar registro de afiliación**

Respecto a **Feliciano Rosario Martínez**, ciudadano que no realizó el refrendo de afiliación correspondiente al *PAN* en el dos mil quince, lo cual actualiza una causal de baja del padrón de militantes del instituto político denunciado; ante ello, el partido político debió realizar los trámites correspondientes a efecto de eliminarlo de su padrón de militantes.

c) Lugar. Con base en las razones plasmadas en los escritos de denuncias, se deduce que las faltas atribuidas al *PAN* se cometieron de la siguiente manera:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018

No	Ciudadano	Entidad
11	Miriam Dolores Vidal Rita	Ciudad de México

No	Ciudadano	Entidad
1	Estela Raquel Murillo Larios	Colima

No	Ciudadano	Entidad
2	Verónica Guzmán Mercado	Estado de México

No	Ciudadano	Entidad
15	Dulce Monserrat García de Alba Rodríguez	Jalisco

No	Ciudadano	Entidad
8	Francisco Javier Cervantes Germán	Michoacán
10	Samuel Amezcua Peral	
14	Rosa Elena Prado Ocegueda	
17	Claudia Rocío García Cano	
18	Héctor León Aviña	
19	Karla Janinne Mendizábal Valdés	

No	Ciudadano	Entidad
6	Maricruz Negrete Solís	Puebla

No	Ciudadano	Entidad
5	José Alejandro Cauich Aguillon	Quintana Roo

No	Ciudadano	Entidad
12	Feliciano Rosario Martínez	San Luis Potosí

No	Ciudadano	Entidad
13	Bianca Abigail Alarcón Zamora	Sinaloa

No	Ciudadano	Entidad
16	Brenda Imelda Borbón Escalante	Sonora
3	Karla Gretel Mendívil Quiñonez	

No	Ciudadano	Entidad
9	Gabriel Nouche Ramírez	Veracruz

No	Ciudadano	Entidad
7	José Alberto Pérez Marrufo	Yucatán

No	Ciudadano	Entidad
4	Ma. del Carmen Loera González	Zacatecas

E. Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Se considera que en el caso existe una conducta **dolosa** por parte del *PAN*, en violación a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e) del *COFIPE*, disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*.

La falta se califica como **dolosa**, por lo siguiente:

- El *PAN* es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus constitucional de **entidad de interés público**, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la *Constitución*; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- El *PAN* está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de los ciudadanos, de acuerdo con los artículos 38, párrafo 1, inciso a), del *COFIPE* y 25, párrafo 1, inciso a) de la *LGPP*.
- El de libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que

constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.

- Todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.
- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e), del *COFIPE* y 25, párrafo 1, inciso a), de la *LGPP*.
- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria**.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad

nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.

- La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político o, en su caso, la omisión de desafiliación, es una violación de orden constitucional y legal que **requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento.**

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta se considera dolosa, porque:

- 1) Los quejosos aducen que no solicitaron en momento alguno su registro o incorporación como militantes al *PAN*.
- 2) Quedó acreditado que los quejosos aparecieron en el padrón de militantes del *PAN*.
- 3) El partido político denunciado no demostró que la afiliación de los quejosos se hubiera realizado a través de los mecanismos legales y partidarios conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y voluntaria de los denunciantes.
- 4) El partido denunciado no demostró ni probó que la afiliación y, en su caso, la omisión de desafiliación de los quejosos fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun indiciaria, para estimar que la afiliación de los quejosos fue debida y apegada a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.

F. Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el *PAN*, se cometió al afiliar indebidamente a **dieciocho (18)** ciudadanos, sin demostrar al acto volitivo de

éstos tanto de ingresar y, en el caso, de **Feliciano Rosario Martínez**, de permanecer inscrito en su padrón de militante como de haber proporcionado sus datos personales para ese fin.

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en garantizar el derecho de libre afiliación y la protección de los datos personales de los ciudadanos mexicanos, mediante la conservación de los documentos atinentes que permitan demostrar el acto de voluntad de los ciudadanos quejosos de militar en los distintos partidos políticos ni para el uso de sus datos personales.

2. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A. Reincidencia

Por cuanto a la **reincidencia** en que pudiera haber incurrido el **PAN**, este organismo electoral autónomo considera que **no se actualiza**.

De conformidad con el artículo 355 párrafo 6 del *COFIPE*, cuyo contenido reproduce el diverso 458, párrafo 6 de la *LGIPE*, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el mencionado *Código*, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, la *Sala Superior* ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);

2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
3. Que en ejercicios anteriores el infractor **haya sido sancionado por esa infracción mediante Resolución o sentencia firme.**

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el *Tribunal Electoral*, a través de la Tesis de Jurisprudencia **41/2010**, de rubro **REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.**¹²²

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con anterioridad.

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta.

En este sentido, debe precisarse que, en el presente asunto, no puede considerarse actualizado dicho supuesto por cuanto hace al **PAN**, pues en los archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya sancionado a ese instituto político por faltas como la que se sanciona por esta vía, que se hayan dictado con anterioridad a los hechos materia de las presentes denuncias.

B. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

¹²² Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010>

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de dieciocho (18) ciudadanos y la desafiliación de Feliciano Rosario Martínez, por parte del *PAN*.
- Se comprobó que el *PAN* **afilió a dieciocho (18) ciudadanos** sin demostrar contar con la documentación soporte correspondiente.
- Se comprobó que el *PAN* **no desafilió**, en dos mil quince a **Feliciano Rosario Martínez**, sin demostrar que medió la voluntad de su agremiado de pertenecer nuevamente o estar inscrito a dicho instituto político.
- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, de optar por ser o no militante de algún partido político, y la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018

- Para materializar la afiliación indebida de los denunciados, se utilizaron indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para formar el padrón de afiliados del *PAN*.
- No existió un beneficio por parte del partido denunciado, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral.
- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso Electoral.
- No existe reincidencia por parte del *PAN*.

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente **calificar la falta** en que incurrió el *PAN* como de **gravedad ordinaria**, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el partido denunciado dolosamente infringió el derecho de libre afiliación de los hoy quejosos, lo que constituye una violación al derecho fundamental de los ciudadanos reconocidos en la *Constitución*.

Al respecto, es importante precisar que para efectos de determinar el monto de la sanción a imponer se debe diferenciar, **como en el caso acontece, si se está ante una afiliación indebida** o una violación al derecho de libre afiliación en su vertiente de no permitirle al quejoso ser desafiliado.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo resuelto por la *Sala Superior* al dictar sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-141/2018, en la que determinó, esencialmente, lo siguiente:

“Finalmente, para efectos de la sanción a imponer, consideró oportuno diferenciar entre aquellos ciudadanos de los que se utilizaron indebidamente sus datos personales para afiliarlos sin su consentimiento al partido denunciado (once ciudadanos) y aquella que denunció la presunta indebida afiliación en su vertiente de falta de atención al derecho de desafiliación, puesto que, si bien en ambos casos estamos ante la presencia de una falta grave ordinaria, lo cierto es que en el primero de los supuestos hubieron hechos afirmativos tendentes a menoscabar el derecho de libre afiliación, utilizando datos personales de los afectados y en el segundo, se trata de una omisión, lo cual conlleva que la sanción imponer en cada supuesto sea diferenciada.

Por tal motivo, en el caso concreto, se estima que la motivación expuesta por el Instituto Nacional Electoral fue suficiente para justificar la individualización de la sanción.”

C. Sanción a imponer

Ahora bien, la mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción.

Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor entidad.¹²³

El artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIPE*, dispone el catálogo de sanciones a imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México; reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita; y en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la *Constitución* y de la *LGIPE*, con la cancelación de su registro como partido político.

¹²³ Véase la Tesis **XXVIII/2003**, del *Tribunal Electoral*, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción (especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción acreditada), así como la conducta realizada por el **PAN** se determina que debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida.

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la *LGIPE*, confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que, a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realicen una falta similar.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que ni el *COFIPE* ni la *LGIPE*, determinan pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo establecen las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

Asimismo, es importante tomar en cuenta que el número de ciudadanos en los que se actualizó la violación al derecho a la libre afiliación tanto en su vertiente de afiliación indebida de dieciocho ciudadanos como en su vertiente de no permitir a

un ciudadano ser desafiliado, por haber renunciado a su militancia, y el partido denunciado fue omiso en darlo de baja.

Con base en lo anterior, este Consejo General estima que, derivado de las circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida al **PAN**, justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido se replica con el diverso 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGPE*, consistente en una **MULTA unitaria por cuanto hace a cada uno de los diecinueve ciudadanos sobre quienes se cometió la falta acreditada**, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto.

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la sanción a imponer.

▪ **Afiliación indebida**

En este orden de ideas, es pertinente hacer notar, que ha sido criterio de esta autoridad, en la resolución INE/CG120/2018, de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/ALC/CG/39/2017, así como en la resolución INE/CG448/2018, de once de mayo de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario

sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2017, las cuales fueron confirmadas por el *Tribunal Electoral* al dictar sentencia el veinticinco de abril y once de mayo de dos mil dieciocho, en los medios de impugnación con clave SUP-RAP-047/2018¹²⁴ y SUP-RAP-137/2018,¹²⁵ respectivamente, en los que se sancionó por una afiliación indebida de un ciudadano, en cada caso, con una multa equivalente a **642 (seiscientos cuarenta y dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México**, al momento de la comisión de la conducta, sanción que se estima debe tomarse como base para el presente asunto, si se considera que en dichos asuntos se demostró la comisión de una infracción similar a la que acontece en los casos que aquí se resuelven.

- **Violación al derecho a la libre afiliación en su vertiente de no permitir a un ciudadano ser desafiliado**

Cabe referir que ha sido criterio de este Consejo General en la resolución INE/CG536/2018,¹²⁶ de veinte de junio de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/GPM/JL/OAX/28/2018, derivado de una falta de la misma naturaleza a la que aquí se estudia, esto es por violación al derecho a la libre afiliación en su vertiente de no permitir a los ciudadanos ser desafiliados, sancionar con una multa equivalente a **321 (trescientos veintiún) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México al PAN, por UN ciudadano que no fue desafiliado.**

En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta causa, y que, en la especie, el *PAN* **afilió indebidamente a dieciocho ciudadanos** y respecto a **un ciudadano violó su derecho a la libre afiliación en su vertiente de no permitirle ser desafiliado, ya que lo mantiene en su padrón de militantes sin su consentimiento como su afiliado, utilizando para ello sus datos personales**, por tanto, es claro que la individualización de la sanción que se aplique,

¹²⁴ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_judicial/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0047-2018.pdf

¹²⁵ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_judicial/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0137-2018.pdf

¹²⁶ Consultable en la página de internet del *INE* o bien en la dirección electrónica: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96450/CGor201806-20-rp-16-10.pdf>

debe resultar proporcional al número de ciudadanos en cuyo perjuicio se cometió la falta, sin perder de vista las condiciones socioeconómicas del instituto político.

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad debe determinar su monto o cuantía, **tomando en cuenta** las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que corresponda.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión que tiene sustento en la Tesis relevante **XXVIII/2003**,¹²⁷ emitida por el *Tribunal Electoral*, misma que a letra establece:

“SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.- En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede

¹²⁷ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018

constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.”

Ahora bien, a juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con base en lo dispuesto en la fracción II del numeral citado, lo procedente es imponer sendas **multas**, conforme a lo siguiente:

▪ **Afiliación indebida**

642 (seiscientos cuarenta y dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento de la comisión de la conducta.

▪ **Violación al derecho a la libre afiliación en su vertiente de no permitir a los ciudadanos ser desafiliados**

321 (trescientos veintiún) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México.

Al respecto, es un hecho notorio que se invoca en términos de lo establecido en el artículo 358 del *COFIPE*, cuyo contenido se replica en el diverso 461 de la *LGIPE*, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fija anualmente los montos respectivos, mismos que al ser relacionados con las fechas de afiliación u omisión de desafiliación, para obtener la sanción que corresponde por cuanto a cada uno de los ciudadanos, arrojan lo siguiente:

PAN		
Total de quejosos	Salario mínimo	Sanción a imponer
Afiliación en 1991		
1	\$13.33 ¹²⁸	\$8,557.86
Afiliación en 1995		
1	\$18.30	\$11,748.60
Afiliación en 1996		
1	\$22.60	\$14,509.20

¹²⁸ 13,330.00 En esa fecha se contaba con tres decimales más en la moneda nacional.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018

PAN		
Total de quejosos	Salario mínimo	Sanción a imponer
Afiliación en 2013		
1	\$64.76	\$41,575.92
Afiliación en 2014		
13	\$67.29	\$561,602.34
Afiliación en 2015		
1	\$70.10	\$45,004.20
Omisión de desafiliación en 2015		
1	\$70.10	\$22,502.10
TOTAL		\$705,500.22 [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].

Sanción por ciudadano:

No.	Nombre del quejoso	Fecha de Afiliación	Salario Mínimo	Monto por Ciudadano
1	Estela Raquel Murillo Larios	03/03/2014	\$67.29	\$43,199.98
2	Verónica Guzmán Mercado	25/02/2014	\$67.29	\$43,199.98
3	Karla Gretel Mendivil Quiñonez	22/01/2014	\$67.29	\$43,199.98
4	Ma. del Carmen Loera González	24/01/2014	\$67.29	\$43,199.98
5	José Alejandro Aguillon Cauich	09/06/2014	\$67.29	\$43,199.98
6	Maricruz Negrete Solís	30/06/1995	\$18.30	\$11,748.25
7	José Alberto Pérez Marrufo	01/06/1991	\$13.33	\$8,557.30
8	Francisco Javier Cervantes Germán	24/01/2014	\$67.29	\$43,199.98
9	Gabriel Nouche Ramírez	21/04/2014	\$67.29	\$43,199.98
10	Samuel Amezcua Peral	08/01/2014	\$67.29	\$43,199.98
11	Miriam Dolores Vidal Rita	13/12/2013	\$64.76	\$41,575.89
12	Feliciano Rosario Martínez	Desafiliación 2015	\$70.10	\$22,501.90
13	Bianca Abigail Alarcón Zamora	13/04/2015	\$70.10	\$45,003.81
14	Rosa Elena Prado Ocegueda	06/01/2014	\$67.29	\$43,199.98
15	Dulce Monserrat García de Alba Rodríguez	10/02/2014	\$67.29	\$43,199.98
16	Brenda Imelda Borbón Escalante	28/04/1996	\$22.60	\$14,508.80
17	Claudia Rocío García Cano	03/08/2014	\$67.29	\$43,199.98
18	Héctor León Aviña	26/07/2014	\$67.29	\$43,199.98
19	Karla Janinne Mendizábal Valdés	17/02/2014	\$67.29	\$43,199.98

\$705,495.69
TOTAL [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, pues sin ser gravosa, sí puede inhibir al **PAN**, para que en el futuro vigile el cumplimiento de las normas de la materia.

Ahora bien, es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la *Constitución* —efectuado por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones.

En esas condiciones, lo procedente es transformar la sanción que se considera idónea, expresada en salarios mínimos, a Unidades de Medida y Actualización, para lo cual es necesario dividir el monto inicial (seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México multiplicado por el salario mínimo vigente en cada año señalado en el cuadro), entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, misma que equivale, para el ejercicio fiscal en curso, a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M. N.).

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 10/2018,¹²⁹ del *Tribunal Electoral*, de rubro y contenido siguiente:

“MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.- De la interpretación sistemática de los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transitorios segundo y tercero del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como 44, párrafo primero, inciso aa), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando en consideración el principio de legalidad que rige en los procedimientos sancionadores, se advierte que el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del ilícito.”

¹²⁹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=Jurisprudencia,10/2018>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018

De esta manera, al aplicar la fórmula mencionada, se obtiene lo siguiente:

Salario mínimo vigente	El SMGV se multiplica por 642 días de SMGV en el año	La cifra obtenida de la multiplicación anterior, se divide entre la Unidad de Medida y Actualización vigente de \$80.60	La cifra obtenida de la operación anterior se multiplica por el número de ciudadanos	Sanción a imponer en Unidad de Medida y Actualización
Afiliación en 1991 \$13.33	642	106.17	1	106.17
Afiliación en 1995 \$18.30	642	145.76	1	145.76
Afiliación en 1996 \$22.60	642	180.01	1	180.01
Afiliación en 2013 \$64.76	642	515.83	1	515.83
Afiliación en 2014 \$67.29	642	535.98	13	6,967.74
Afiliación en 2015 \$70.10	642	558.36	1	558.36
Desafiliación en 2015 \$70.10	321	279.18	1	279.18

La suma de los montos antes referidos, corresponde a 8,753.05 (ocho mil setecientos cincuenta y tres punto cero cinco) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$705,495.83 (setecientos cinco mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 83/100 M.N.) [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].

Debe precisarse que se considera que la multa impuesta al **PAN** constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, ya que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, se concluye que la misma resulta eficaz y proporcional.

D. El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la infracción

Se estima que la infracción cometida por parte del **PAN**, aun cuando causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018

objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de la infracción.

E. Las condiciones socioeconómicas del infractor

Sobre este punto, es preciso señalar que conforme al Acuerdo INE/CG339/2017, emitido por este *Consejo General* el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se estableció que, entre otros, el **PAN** recibiría mensualmente en el presente ejercicio, por concepto de financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes, la siguiente cantidad:

SUJETO	Monto del financiamiento público para el sostenimiento de Actividades Ordinarias del mes de septiembre 2018
PAN	\$68,993.261.00

Ahora bien, según fue informado por la *DEPPP*, a través del oficio **INE/DEPPP/DE/DPPF/5693/2018**, el monto de la ministración mensual correspondiente a septiembre de dos mil dieciocho, debía ser ajustado en función de las sanciones administrativas pendientes de cubrir por dicho instituto político nacional, por lo cual la cifra total a recibir sería la siguiente:

SUJETO	IMPORTE DE LA MINISTRACIÓN DE SEPTIEMBRE DE 2018	IMPORTE TOTAL DE LAS SANCIONES SEPTIEMBRE 2018	IMPORTE DE REINTEGRO DE FINANCIAMIENTO LOCAL PARA GASTOS DE CAMPAÑA	IMPORTE NETO DE LA MINISTRACIÓN
PAN	\$68,993,261.00	\$180,672.00	\$0.00	\$68,812,589.00

F. Impacto en las actividades del sujeto infractor

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta al **PAN**, no es de carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida, respecto al monto del financiamiento que recibirá por concepto de actividades ordinarias permanentes en el mes de septiembre del año en curso, los siguientes porcentajes:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018

Partido político	Año	Monto de la sanción por ciudadano. ¹³⁰	Ciudadanos indebidamente afiliados	% de la ministración mensual por ciudadano
PAN	1991	\$8,557.30	1	%0.01
	1995	\$11,748.25	1	%0.01
	1996	\$14,508.80	1	%0.02
	2013	\$41,575.89	1	%0.06
	2014	\$43,199.98	13	%0.06
	2015	\$45,003.81	1	%0.06
	2015 (Desafiliación)	\$22,501.90	1	%0.03

Por consiguiente, la sanción impuesta al **PAN** no es de carácter gravoso, si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual correspondiente al mes de septiembre de este año.

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción cometida por el **PAN** (especialmente los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con el financiamiento que recibe del *INE* para el mes de septiembre de dos mil dieciocho, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político sancionado.

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el partido político de mérito —tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagar sin que ello afecte sus operaciones ordinarias, además de que las sanciones son proporcionales a las faltas cometidas y se estima que, sin resultar excesivas ni ruinosas, pueden generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la *Sala Superior* en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-250/2009¹³¹, es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

¹³⁰ Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.

¹³¹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm>

QUINTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE LOS QUEJOSOS COMO MILITANTES. En tal sentido, se tiene que la voluntad de los denunciantes es no pertenecer al *PAN*, por lo que se debe vincular al partido político, para que, de ser el caso, en el supuesto que los quejosos continúen en su padrón de militantes, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentaron su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, los medios de prueba que amparen el cumplimiento.

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017,¹³² de cinco de enero de dos mil diecisiete, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el *INE*, que lo vincule con un instituto político en particular.

Asimismo, se considera procedente es remitir copia certificada del escrito de queja con sus respectivos anexos al *PAN*, para que en el ámbito de su competencia realice las investigaciones pertinentes e instaure los procedimientos que su normativa interna establezca y de ser el caso, finque las responsabilidades que correspondan, por la omisión de sus órganos internos, de desafiliar a **Feliciano Rosario Martínez**.

Sobre esto último, a similar conclusión arribó este Consejo General en la Resolución INE/CG536/2018, de veinte de junio de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/GPM/JL/OAX/28/2018.

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la *Constitución*,¹³³ se precisa que

¹³² Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/JDC/2/SUP_2017_JDC_2-626321.pdf

¹³³ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: **"TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL"**, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4, Materia:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018

la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previsto en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara **fundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra del **PAN**, al infringir las disposiciones electorales de libre afiliación de **diecinueve ciudadanos**, en términos de lo establecido en los **Apartados A y B** del Considerando TERCERO de esta Resolución.

SEGUNDO. En términos del Considerando CUARTO de la presente Resolución, se impone al **PAN**, una multa por la afiliación indebida y, en su caso, omisión de desafiliación, de cada uno de los **diecinueve ciudadanos**, conforme a los montos que se indican a continuación:

No	Ciudadano	Importe de la multa
1	Estela Raquel Murillo Larios	535.98 (quinientos treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.98 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014]
2	Verónica Guzmán Mercado	535.98 (quinientos treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.98 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014]
3	Karla Gretel MENDÍVIL Quiñonez	535.98 (quinientos treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.98 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014]
4	Ma. del Carmen Loera González	535.98 (quinientos treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.98 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014]
5	José Alejandro Aguillon Cauich	535.98 (quinientos treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.98 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014]
6	Maricruz Negrete Solís	145.76 (ciento cuarenta y cinco punto setenta y seis) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$11,748.6 (Once mil setecientos cuarenta y ocho pesos 6/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 1995]
7	José Alberto Pérez Marrufo	106.17 (ciento seis punto diecisiete) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$8,557.86 (ocho mil quinientos cincuenta y siete pesos 86/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 1991]
8	Francisco Javier Cervantes Germán	535.98 (quinientos treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.98 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014]

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018

No	Ciudadano	Importe de la multa
9	Gabriel Nouche Ramírez	535.98 (quinientos treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.98 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014]
10	Samuel Amezcua Peral	535.98 (quinientos treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.98 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014]
11	Miriam Dolores Vidal Rita	515.83 (quinientas quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$41,575.92 (Cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 92/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2013]
12	Feliciano Rosario Martínez	279.18 (doscientos setenta y nueve punto dieciocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$22,501.90 (veintidós mil quinientos un pesos 90/100 M.N.) [Omisión de desafiliar 2015]
13	Bianca Abigail Alarcón Zamora	558.36 (quinientos cincuenta y ocho punto treinta y seis) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$45,004.2 (Cuarenta y cinco mil cuatro pesos 2/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2015]
14	Rosa Elena Prado Ocegueda	535.98 (quinientos treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.98 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014]
15	Dulce Monserrat García de Alba Rodríguez	535.98 (quinientos treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.98 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014]
16	Brenda Imelda Borbón Escalante	180.01 (ciento ochenta punto uno) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$14,509.2 (catorce mil quinientos nueve pesos 2/100 M. N.) [Ciudadano afiliado en 1996]
17	Claudia Rocío García Cano	535.98 (quinientos treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.98 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014]
18	Héctor León Aviña	535.98 (quinientos treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.98 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014]
19	Karla Janinne Mendizábal Valdés	535.98 (quinientos treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.98 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014]

TERCERO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7 de la *LGIFE*, el monto de la multa impuesta al **PAN**, será deducido de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su Considerando CUARTO.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ERML/JD02/COL/151/2018

CUARTO. Se vincula al *PAN* para que, de ser el caso, en el supuesto que los quejosos continúen en su padrón de militantes, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentaron su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, los medios de prueba que amparen el cumplimiento, conforme a lo dispuesto en su Considerando QUINTO.

QUINTO. Se da vista al *PAN* a efecto de que en el ámbito de su competencia realice las investigaciones pertinentes e instaure los procedimientos que su normativa interna establezca y de ser el caso, finque las responsabilidades que correspondan, por la omisión de sus órganos internos, de desafiliar a un ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en el Considerando CUARTO.

SEXTO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previsto en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Notifíquese personalmente a los ciudadanos que se indican a continuación:

No.	Nombre del quejoso	No.	Nombre del quejoso
1	Estela Raquel Murillo Larios	11	Miriam Dolores Vidal Rita
2	Verónica Guzmán Mercado	12	Feliciano Rosario Martínez
3	Karla Gretel Mendívil Quiñonez	13	Bianca Abigail Alarcón Zamora
4	Ma. del Carmen Loera González	14	Rosa Elena Prado Ocegueda
5	José Alejandro Cauich Aguillon	15	Dulce Monserrat García de Alba Rodríguez
6	Maricruz Negrete Solís	16	Brenda Imelda Borbón Escalante
7	José Alberto Pérez Marrufo	17	Claudia Rocío García Cano
8	Francisco Javier Cervantes Germán	18	Héctor León Aviña
9	Gabriel Nouche Ramírez	19	Karla Janinne Mendizábal Valdés
10	Samuel Amezcua Peral		

Así como al **PAN**, por conducto de su respectivo representante ante este Consejo General; y por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Ahora, por lo que hace a los Proyectos identificados en el orden del día como los apartados 1.8 y 1.9, separando de la votación en general, por el criterio de desistimiento, incluyendo en el caso del apartado 1.8 en lo general, los efectos de la sanción. _____

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban en lo general, los Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificados en el orden del día como los apartados 1.8 y 1.9, excluyendo de esta votación en lo general, por lo que hace el desistimiento e incluyendo a la votación en lo general, en el caso del apartado 1.8 los efectos de la baja, tomando en cuenta la fe de errata del apartado 1.8. _____

Quienes estén a favor, de aprobarlos en lo general, sírvanse a manifestarlo. _____

Aprobados por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello). _
Ahora, someto a su consideración en lo particular, por lo que hace al criterio del desistimiento tal y como viene en el Proyecto de Resolución. _____

Quienes estén a favor, de aprobarlo como viene en el Proyecto de Resolución, sírvanse a manifestarlo si son tan amables. _____

9 votos. _____

¿En contra? _____

2 votos. _____

Aprobado por 9 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles). _____

(Texto de las Resoluciones aprobadas INE/CG1250/2018 e INE/CG1251/2018)
Ptos. 1.8 y 1.9 _____

INE/CG1250/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ORDINARIO
DENUNCIANTES: JANETH RIOS NOLASCO
Y OTROS
DENUNCIADO: MOVIMIENTO CIUDADANO

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/JRN/J/CD01/QROO/40/2018, INICIADO CON MOTIVO DE LOS ESCRITOS DE QUEJA SIGNADOS POR JANETH RÍOS NOLASCO, MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, LUIS ALBERTO GARCÍA SOSA, JUAN CARLOS CASTILLO CASTILLO, YIBI DE JESÚS REYES RIVERA, XÓCHITL IRELA ZAVALA BOJÓRQUEZ Y BLANCA ESTELA GONZÁLEZ POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA PRESUNTA AFILIACIÓN INDEBIDA, SIN QUE HUBIERE MEDIADO CONSENTIMIENTO ALGUNO, ATRIBUIBLE AL PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO

Ciudad de México, 12 de septiembre de dos mil dieciocho.

GLOSARIO

<i>COFIPE</i>	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>Consejo General</i>	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
<i>Constitución</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JRN/J/CD01/QROO/40/2018

DEPPP	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
DERFE	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
IFE	Instituto Federal Electoral
INE	Instituto Nacional Electoral
LGIPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
LGPP	Ley General de Partidos Políticos
LGSMI	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
MC	Partido Político Movimiento Ciudadano
Reglamento de Quejas	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
Tribunal Electoral	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
UTCE	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral

A N T E C E D E N T E S

I. DENUNCIA. En fechas diversas, se recibieron en la *UTCE* sendos escritos de queja signados por los ciudadanos que a continuación se enlistan, a través de los cuales hicieron del conocimiento de esta autoridad electoral, de manera individual, hechos que contravienen la normatividad electoral, consistentes en la violación del derecho de libertad de afiliación y la utilización de sus datos personales.

No.	NOMBRE	FECHA DE RECEPCIÓN EN LA <i>UTCE</i>	ENTIDAD
1	Janeth Ríos Nolasco	02/02/2018	Quintana Roo

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JRN/J/CD01/QROO/40/2018

No.	NOMBRE	FECHA DE RECEPCIÓN EN LA UTCE	ENTIDAD
2	María Del Carmen Jiménez Hernández	02/02/2018	Quintana Roo
3	Luis Alberto García Sosa	06/02/2018	Oaxaca
4	Juan Carlos Castillo Castillo	07/02/2018	Tabasco
5	Yibi De Jesús Reyes Rivera	07/02/2018	Tabasco
6	Xóchitl Irela Zavala Bojórquez	08/02/2018	Sinaloa
7	Blanca Estela González Mora	08/02/2018	Jalisco

II. RADICACIÓN, ADMISIÓN Y RESERVA DE EMPLAZAMIENTO.¹ El dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, mediante acuerdo emitido por el Titular de la *UTCE*, se ordenó formar el expediente respectivo e iniciar el trámite del presente procedimiento sancionador ordinario, el cual quedó registrado bajo la clave **UT/SCG/Q/JRN/J/CD01/QROO/40/2018**, se ordenó admitir a trámite el procedimiento y se reservó emplazar a las partes hasta en tanto se contara con los elementos necesarios para pronunciarse al respecto.

Con el propósito de constatar los hechos materia de inconformidad y allegarse de los elementos y constancias necesarios para la debida sustanciación del procedimiento indicado, en las fechas que se indican en el cuadro siguiente se acordaron las diligencias que se señalan.

Fecha del acuerdo	Diligencia o requerimiento	Dirigido a	No. de oficio y notificación	Fecha de respuesta
16/02/2018	Se requirió lo siguiente: a) Si actualmente dentro de su Padrón de Afiliados se encuentran registrados los ciudadanos que a ese instituto político se refieren, y que para tal efecto se ordena anexar al presente requerimiento, en sobre cerrado, copia simple de la credencial para votar de los ciudadanos en cuestión.	MC	INE-UT/1637/2018 ² 19 de febrero de 2018	

¹ Visible a fojas 47 a 55 del expediente.

² Visible a foja 63 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JRN/J/CD01/QROO/40/2018

Fecha del acuerdo	Diligencia o requerimiento	Dirigido a	No. de oficio y notificación	Fecha de respuesta
	<p>b) De ser afirmativa su respuesta, informe la fecha de alta en el referido padrón y remita el original o copia certificada de los expedientes en que obren las constancias de afiliación correspondientes.</p> <p>c) De ser negativa su respuesta, indique si anteriormente los ciudadanos fueron afiliados y la fecha de su baja en el referido padrón, y remita el original o copia certificada de los expedientes en que obren las constancias de los procedimientos de desafiliación correspondientes.</p>			21/02/2018 y 23/02/2018 ³
16/02/2018	<p>Para que, en breve término, informe si los ciudadanos que se enlistan, se encuentran registrados dentro del padrón de afiliados del partido político MC.</p> <p>En su caso, indique la fecha a partir de la cual se les dio de alta en el padrón de afiliados de los institutos políticos referidos con antelación y remita el original o copia certificada de los expedientes donde obren las constancias de afiliación respectivas.</p>	DEPPP	INE-UT/1638/20178 19 de febrero de 2018	21/02/2018 ⁴

IV. EMPLAZAMIENTO AL PARTIDO POLÍTICO MC⁵. El dos de abril de dos mil dieciocho, agotadas las diligencias de investigación preliminar, se emitió acuerdo en el que se ordenó emplazar al partido político MC, a través de su representante propietario ante el *Consejo General*, a efecto de que expresara lo que a su derecho conviniera, respecto a la conducta que se le imputaba y aportara las pruebas que considerara pertinentes.

La citada diligencia se tramitó en los siguientes términos:

³ Visible a fojas 70 a 89 del expediente

⁴ Visible a fojas 67 a 69 del expediente.

⁵ Visible a fojas 145 a 152 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JRN/J/CD01/QROO/40/2018

EMPLAZAMIENTO		
DESTINATARIO	OFICIO Y FECHA DE NOTIFICACIÓN	CONTESTACIÓN
MC	INE-UT/4014/2018 04/04/2018 ⁶	El 09/04/2018, se recibió escrito de contestación al emplazamiento (dentro de los cinco días legales para tal efecto), signado por el representante de MC . ⁷

V. ALEGATOS.⁸ Mediante acuerdo de trece de abril de dos mil dieciocho, se ordenó poner a disposición de las partes las actuaciones que integran el presente expediente, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, dicho proveído fue notificado y desahogado en los siguientes términos:

VISTA PARA ALEGATOS		
DESTINATARIOS	OFICIO Y FECHA DE NOTIFICACIÓN	CONTESTACIÓN
MC	INE-UT/4480/2018 16/04/2018 ⁹	El 17/04/2018 se recibió escrito de alegatos (dentro de los cinco días legales para tal efecto), signado por el representante de MC . ¹⁰
LUIS ALBERTO GARCÍA SOSA	INE/OAX/JD05//VS/0485/2018 16/04/2018 ¹¹	No formuló alegatos.
XOCHITL IRELA ZAVALA BOJÓRQUEZ	INE/VS/JD04/-SIN0683/2018 16/04/2018 ¹²	No formuló alegatos.
YIBI DE JESÚS REYES RIVERA	INE/JDE05TAB/1334/2018 17/04/2018 ¹³	No formuló alegatos.
JUAN CARLOS CASTILLO CASTILLO	INE/JDE05TAB/1333/2018 16/04/2018 ¹⁴	No formuló alegatos.

⁶ Visible a fojas 159 a 169 del expediente.

⁷ Visible a fojas 170 a 189 del expediente.

⁸ Visible a fojas 191 a 195 del expediente.

⁹ Visible a fojas 200 a 209 del expediente.

¹⁰ Visible a fojas 210 a 212 del expediente.

¹¹ Visible a fojas 215 a 218 del expediente.

¹² Visible a fojas 220 a 225 del expediente.

¹³ Visible a fojas 228 a 235 del expediente.

¹⁴ Visible a fojas 236 a 239 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JRN/J/CD01/QROO/40/2018

VISTA PARA ALEGATOS		
DESTINATARIOS	OFICIO Y FECHA DE NOTIFICACIÓN	CONTESTACIÓN
BLANCA ESTELA GONZÁLEZ MORA	INE-JAL-JDE05-VS-0182-2018 18/04/2018 ¹⁵	No formuló alegatos.
JANETH RIOS NOLASCO	INE/01JDE/VS/0211/2018 19/04/2018 ¹⁶	No formuló alegatos.
MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ HERNÁNDEZ	INE/01JDE/VS/0212/2018 18/04/2018 ¹⁷	Se desistió de la queja.

VI. DESISITIMIENTO.¹⁸ Mediante acuerdo de dieciséis de mayo de la presente anualidad, la *UTCE* requirió a María del Carmen Jiménez Hernández, para que en un plazo de tres días, ratificara su intención de desistimiento del asunto que nos ocupa, dicho proveído fue notificado y desahogado en los siguientes términos:

DESTINATARIO	OFICIO Y FECHA DE NOTIFICACIÓN	CONTESTACIÓN
MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ HERNÁNDEZ	INE/01JDE/VS/0270/2018 22/05/2018 ¹⁹	El 25/05/2018 se recibió escrito de desistimiento de queja (dentro de los tres días legales para tal efecto), firmado por dicha ciudadana. ²⁰

VII. VISTA A CIUDADANOS²¹. Mediante acuerdo de diecisiete de julio de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a los quejosos, con los formatos de afiliación correspondiente que al efecto *MC* adjuntó, a efecto de que, manifestaran lo que a su derecho conviniera, dicho proveído fue notificado y desahogado en los siguientes términos:

VISTA		
DESTINATARIOS	OFICIO Y FECHA DE NOTIFICACIÓN	CONTESTACIÓN
LUIS ALBERTO GARCÍA SOSA	INE/OAX/JD05/VS/0997/2018 20/07/2018 ²²	No formuló alegatos.

¹⁵ Visible a fojas 241 a 247 del expediente.

¹⁶ Visible a fojas 249 a 252 del expediente.

¹⁷ Visible a fojas 254 a 259 del expediente.

¹⁸ Visible a fojas 260 a 263 del expediente.

¹⁹ Visible a foja 269 a 275 del expediente.

²⁰ Visible a foja 276 del expediente.

²¹ Visible a foja 278 a 282 del expediente.

²² Visible a fojas 287 a 292 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JRN/J/CD01/QROO/40/2018

VISTA		
DESTINATARIOS	OFICIO Y FECHA DE NOTIFICACIÓN	CONTESTACIÓN
XOCHITL IRELA ZAVALA BOJÓRQUEZ	INE/VS/JD04-SIN/1673/2018 19/07/2018 ²³	No formuló alegatos.
YIBI DE JESÚS REYES RIVERA	INE/JDE05TAB/2399/2018 27/07/2018 ²⁴	No formuló alegatos.
JUAN CARLOS CASTILLO CASTILLO	INE/JDE05TAB/2398/2018 27/07/2018 ²⁵	No formuló alegatos.
BLANCA ESTELA GONZÁLEZ MORA	INE-JAL-JDE05-VS-0355-2018 25/07/2018 ²⁶	No formuló alegatos.
JANETH RIOS NOLASCO	Notificación por estrados 03/08/2018 ²⁷	No formuló alegatos.

VIII. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. En su oportunidad, se ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente para que fuera sometido a la consideración de los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias de este Instituto.

IX. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS. En la Octogésima Cuarta Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el seis de septiembre de dos mil dieciocho, la Comisión de Quejas y Denuncias del *INE* analizó el Proyecto de Resolución del procedimiento sancionador ordinario al rubro identificado, en la cual determinó aprobarlo por unanimidad de votos de sus integrantes, y

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERO. COMPETENCIA. El Consejo General es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión de Quejas y Denuncias, conforme a lo dispuesto en los artículos 44,

²³ Visible a fojas 324 a 331 del expediente.

²⁴ Visible a fojas 301 a 312 del expediente.

²⁵ Visible a fojas 313 a 323 del expediente.

²⁶ Visible a fojas 294 a 300 del expediente.

²⁷ Visible a fojas 332 a 347 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JRN/J/CD01/QROO/40/2018

párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*, respecto de las conductas que se definen como infractoras a dicha Ley electoral, atribuidas a los sujetos obligados a la misma.

En el caso, se denuncia la presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la Constitución Federal; así como 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e) del COFIPE, cuyo contenido se reproduce en los diversos 2, párrafo 1, inciso a), y 25, párrafo 1, incisos a) y e), de la *LGIPE*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos e información personal de diversos ciudadanos, a fin de incorporarlos al padrón de militantes del Partido Político MC.

Ahora bien, conforme al artículo 23 del COFIPE, los partidos políticos ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en el citado Código, correspondiendo al IFE —hoy INE— vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley. Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n); y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho Código, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38 del dispositivo legal en cita, las cuales son sancionables por el Consejo General.

Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443 párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la *LGIPE* y 25, incisos a) y e) de la *LGPP*, respectivamente.

En ese sentido, atento a que este Consejo General cuenta entre sus atribuciones con la de vigilar que las actividades de los Partidos Políticos Nacionales se desarrollen con apego a las leyes y cumplan con las obligaciones a que están sujetos, en términos de lo preceptuado en el artículo 44, párrafo primero, inciso j) de la *LGIPE*, es inconcuso que es competente para conocer y resolver lo conducente, respecto a la conducta presuntamente infractora, atribuida a *MC*, en su carácter de partido político nacional y, en su caso, imponer las sanciones que en

derecho correspondan, derivado, esencialmente, por la violación al derecho de libertad afiliación y utilización indebida de datos personales.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017²⁸ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la Sala Superior ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de militantes.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIPE* —los cuales contienen reglas que ya se encontraban previstas en el *COFIPE*, en los artículos 342, párrafo 1, incisos a); 356, 361, 364, 365 y 366—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

No pasa inadvertido que *MC* al responder al emplazamiento que le fue formulado, señaló, a manera de excepción, que no es una atribución del *INE* conocer sobre el

²⁸ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_judicial/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

tema relacionado con el uso de datos personales y, por tanto, se debería remitir el expediente al órgano competente para ello.

Contrario a lo manifestado por el denunciado, esta autoridad estima que si cuenta con competencia para conocer de asuntos relacionados con la afiliación indebida y, en consecuencia, el uso de datos personales, habida cuenta que ambas conductas se encuentran indefectiblemente relacionadas una con otra.

En efecto, si un ciudadano desea afiliarse a un ente político, en pleno ejercicio de su derecho de libre asociación política consagrado en los artículos 35 y 41 Constitucionales, es necesario que para ello proporcione sus datos personales para ese fin. *A contrario sensu*, si un ciudadano refiere haber sido afiliado indebidamente a un partido, es obvio concluir que también se encuentra comprometido el uso de datos personales por parte del partido para llevar a cabo su registro como militante.

Aunado a lo anterior, debe precisarse que las anteriores conclusiones han sido avaladas por el Consejo General de este Instituto al emitir las resoluciones INE/CG444/2018 e INE/CG446/2018, que resolvieron los procedimientos ordinarios sancionadores UT/SCG/Q/JANC/CG/21/2017 e UT/SCG/Q/RGG/CG/66/2017.

Incluso, se debe precisar que la segunda de las resoluciones aludidas fue impugnada y confirmada por la *Sala Superior* al resolver expediente SUP-RAP-141/2018, en el que, entre otras cuestiones, determinó confirmar la resolución y, por ende, la sanción impuesta.

SEGUNDO. NORMATIVIDAD APLICABLE. En el presente asunto se debe determinar lo conducente respecto a la conducta de estudio, en ese sentido, es necesario subrayar que las presuntas faltas (indebida afiliación y uso indebido de datos personales) se cometieron **durante la vigencia del COFIPE**, puesto que, en diversos casos, el registro o afiliación de los quejosos al partido MC, se realizó antes del treinta y uno de marzo de dos mil catorce, fecha en la cual se encontraba vigente dicho código.

En efecto, de conformidad con lo establecido en el Punto cuarto de los *Lineamientos para la Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para*

la conservación de su registro, aprobados por el *Consejo General* del entonces IFE mediante Acuerdo CG617/2012, de treinta de agosto de dos mil doce, los Partidos Políticos Nacionales debían capturar en el *Sistema de Cómputo desarrollado por la Unidad Técnica de Servicios de Informática*, los datos de todos sus afiliados en el periodo comprendido **entre el uno de abril de dos mil trece y el treinta y uno de marzo de dos mil catorce**, siendo que precisamente en el registro realizado en ese periodo se advierte la aparición de los quejosos en el partido político *MC*.

Por tanto, si al momento de la comisión de las presuntas faltas se encontraba vigente el *COFIPE*, es este el ordenamiento legal que debe aplicarse para las cuestiones sustantivas del presente procedimiento, al margen que las faltas pudieran haber sido advertidas por los quejosos y cuestionadas mediante las quejas que dieron origen al presente asunto, una vez que dicha norma fue abrogada por la *LGIPE*, así como que este último ordenamiento sea fundamento para cuestiones procesales o adjetivas.

Sin perjuicio de que, en lo conducente, puedan aplicarse los plazos precisados en los transitorios correspondientes del referido Decreto, así como las reglas procesales contenidas en la *LGIPE*,²⁹ y en el *reglamento*.

Lo anterior, en consonancia con lo establecido en la tesis de jurisprudencia de rubro ***RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES***.³⁰

Respecto de Blanca Estela González Mora, considerando que dicha ciudadana fue presuntamente afiliada de manera indebida por *MC*, el primero de junio de dos mil catorce, es decir, con posterioridad a la entrada en vigor de la *LGIPE*, el presente caso deberá resolverse conforme a las normas vigentes.

²⁹ Al respecto, resultan aplicables las **jurisprudencias** del Poder Judicial de la Federación de rubros: ***RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES, NO EXISTE POR REGLA GENERAL.***, Novena Época, Tribunales colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Julio de 1998, materia Penal, tesis VI.2°, J/140, Página 30; ***RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES***, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Abril de 1997, material Civil, tesis I.8°.C. J/1, Página 178 y ***DERECHOS PROCESALES ADQUIRIDOS. CONCEPTO DE, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LA LEY***, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo V. Civil Segunda Parte-TCC Primera Sección-Civil Subsección 2-Adjetivo, materia Civil, tesis 1048, página 1172.

³⁰ Consulta disponible en la dirección electrónica: <http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/1012/1012265.pdf>

TERCERO. SOBRESEIMIENTO. El cuatro de mayo de la presente anualidad, se recibió constancia de notificación realizada por la 01 Junta Distrital de este Instituto en el estado de Quintana Roo, en el que se advierte que María del Carmen Jiménez Hernández manifestó su intención de desistirse de la queja presentada el dos de febrero del año en curso, en el que refiere textualmente lo siguiente:

“...pero no quiero nada y me desisto de la queja”

En ese tenor, la *UTCE* requirió, mediante acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho a la citada ciudadana a fin de ratificar su intención de desistirse de la queja, así pues, el trece de junio del año en que se actúa, se recibió ante la *UTCE*, escrito signado por la referida ciudadana, la cual en lo que interesa, señaló lo siguiente:

“Que en atención al requerimiento que me formuló manifiesto que ratifico en todos sus términos el DESISTIMIENTO de la queja que interpuse, pues es mi voluntad dar por terminado este asunto y dedicarme al empleo que más me acomode.”

Ahora bien, para determinar lo conducente en el presente caso, es necesario tener en cuenta lo previsto en los artículos 466, párrafo 2, inciso c) LGIPE y 46, párrafo 3, fracción III del Reglamento de Quejas, que establecen lo siguiente:

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo 466.

(...)

2. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

(...)

c) El denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y cuando lo exhiba antes de la aprobación del Proyecto de Resolución por parte de la Secretaría y que a juicio de la misma, o por el avance de la investigación, no se trate de la imputación de hechos graves, ni se vulneren los principios rectores de la función electoral.

(...)

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral

Artículo 46.

(...)

3. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

(...)

III. El denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y cuando lo exhiba antes de la aprobación del proyecto y que a juicio de la Unidad Técnica, o por el avance de la investigación, no se trate de la imputación de hechos graves, ni se vulneren los principios rectores de la función electoral; y

De los artículos antes descritos, se advierte que para hacer efectivo el escrito de desistimiento, y con ello se proceda al sobreseimiento de la denuncia se debe de actualizar los supuestos siguientes:

- Que, por el avance de la investigación, no se trate de la imputación de hechos graves.
- Que no se vulneren los principios rectores de la función electoral.

Ahora bien, para dar por concluida la instancia, no basta con la simple expresión de quien instó la actividad del órgano sancionador, respecto a su deseo de no proseguir con la tramitación del procedimiento respectivo, puesto que la propia normatividad electoral dispone que para la procedencia del desistimiento, es necesario que la autoridad competente valore, en el particular, si los hechos materia de la denuncia revisten gravedad, o bien, si con su realización, pudieran verse afectados los principios rectores de la función comicial.

En ese sentido, se estima que, para estar en posibilidad de acordar favorablemente el desistimiento solicitado, se debe tomar en cuenta el criterio sostenido por la Sala Superior del *Tribunal Electoral* al resolver el recurso de apelación **SUP-RAP-100/2008**, el veinticinco de junio de dos mil ocho, en el que se hizo evidente lo siguiente:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JRN/J/CD01/QROO/40/2018

De ahí que este Tribunal considere, que el Instituto Federal Electoral, en ejercicio de sus atribuciones, debe apreciar y calificar, en cada caso particular, si es de admitir el desistimiento de una queja o denuncia, por no existir afectación alguna al interés público, al ejercicio de las funciones que le corresponden y los principios que la rigen, los que han de prevalecer bajo cualquier otro interés, pues de lo contrario el sobreseimiento sería improcedente.

En este orden de ideas, la autoridad, en atención a las circunstancias particulares del caso, habrá de considerar si el desistimiento del denunciante, es apto para dictar el sobreseimiento en una queja o denuncia, a través de una determinación motivada.

En el caso particular de María del Carmen Jiménez Hernández, quien presentó queja con el objeto de denunciar que indebidamente fue afiliada al padrón de MC, argumentando la ausencia de su consentimiento para la referida afiliación, así como un presunto uso de sus datos personales para tal fin; por lo que solicitó que se investigara y en su caso, se impusiera la sanción correspondiente.

Dicho escrito de queja fue registrado y admitido con el número de expediente citado al rubro; sin embargo, el trece de junio del año en que se actúa, se recibió ante la UTCE, escrito signado por la referida ciudadana, en el que ratifica su voluntad de desistirse de la presente instancia.

Ahora bien, de las constancias que obran en autos se advierte que los hechos puestos en conocimiento de esta autoridad, constituyen imputaciones, que de demostrarse, podrían calificarse como graves, al vulnerarse el derecho de libre afiliación y de protección de datos personales, los cuales encuentran establecidos desde la propia Constitución Federal, así como en la *LGIFE*, sin embargo, también es cierto que esa vulneración trasciende en forma exclusiva en la esfera de derechos de la ciudadana en lo individual, y, por tanto, debe respetarse la voluntad de esta de controvertir, en primera instancia, la posible transgresión a los mismos, o bien, consentir en cualquier momento procesal, hasta antes del dictado de la resolución atinente, su inscripción en los padrones de éstos y la consecuente utilización de datos personales.

Con base a lo anterior, se considera procedente acordar favorablemente el escrito de referencia, mediante el cual la denunciante expresó claramente su intención de desistirse del escrito de queja que originó el procedimiento de mérito. En consecuencia, lo **procedente es sobreseer el presente procedimiento ordinario sancionador, exclusivamente por lo que se refiere a María del Carmen Jiménez Hernández.**

CUARTO. ESTUDIO DE FONDO

1. Planteamiento del caso

De la lectura integral de las constancias que integran el presente expediente, se desprende que los hechos puestos en conocimiento de esta autoridad, consisten, esencialmente, en la presunta indebida afiliación de *Janeth Ríos Nolasco, Luis Alberto García Sosa, Juan Carlos Castillo Castillo, Yibi De Jesús Reyes Rivera, Xóchitl Irela Zavala Bojórquez y Blanca Estela González* al partido político MC, al no mediar su consentimiento y, en su caso, la utilización de sus datos personales para tal fin.

Según los denunciantes, dicha situación vulnera sus derechos político-electorales, pues refieren que en ningún momento manifestaron su voluntad de afiliarse a dicho partido político lo cual en su concepto evidencia, además, un supuesto uso indebido de sus datos y documentos personales.

Los hechos fueron denunciados a través de sendos escritos de queja signados por las y los ciudadanos ya enunciados, derivado de la compulsa realizada por este Instituto a través de sus Juntas Distritales, en el proceso de selección para ocupar cargos como Supervisor Electoral y Capacitador Asistente Electoral en el Proceso Electoral 2017-2018.

En ese sentido, conforme a lo manifestado por los quejosos, se podría actualizar una supuesta infracción a las disposiciones constitucionales, convencionales legales y reglamentarias en materia de libertad de afiliación política del ciudadano.

2. Excepciones y defensas

En respuesta a la imputación de la que es objeto MC, a través de su Representante ante el *Consejo General*, en síntesis, hizo valer en su defensa lo siguiente:³¹

- *Señala que, el interés profundo de MC es respetar siempre la ley, las instituciones y a los ciudadanos, por lo que se han conducido dentro del contexto de la libertad de elección de los ciudadanos de formar parte de un partido político o no.*
- *Refiere que dicha institución política actúa de buena fe, es decir, que confían plenamente en los datos que asientan las personas en las cédulas de afiliación, y como institución se lee el contenido de las cédulas para que se tenga claridad del acto, que se encuentren conscientes de que es su propia voluntad proporcionar sus datos para obtener el estatus de militante, y en ese mismo acto, se les pide su firma parecida a la de su credencial de elector.*
- *Manifiesta que los datos que ostentan en su base de datos los militantes son los mismos que los que se obtuvieron del registro libre y voluntario de cada uno de los ciudadanos que en su momento desearon formar parte de su partido político.*
- *Advierte que dicho partido respeta la libre voluntad de afiliarse y de acceder a sus derechos ARCO, siempre y cuando el titular o su representante legal acrediten su identidad o representación, según sea el caso.*
- *En ese sentido, señala que en caso de que un partido político incumpla con dicha obligación, el quejoso debe acudir a las instancias competentes, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por lo que consideran que no es atribución del Instituto Nacional Electoral conocer de ese tema, por lo que se debería remitir al órgano legalmente competente para ello.*
- *De las constancias que obran en el expediente, no existe elemento alguno a que arribe que las afiliaciones fueron realizadas violando los derechos de los ciudadanos, por lo que las mismas fueron realizadas dentro del derecho legítimo con el que cuentan los partidos políticos y los ciudadanos de la libre*

³¹ Visible a fojas 170 a 189 y 210 a 212 del expediente

afiliación consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- *Debe prevalecer el principio de presunción de inocencia, toda vez que de los elementos aportados por la parte acusadora no resultan suficientes para acreditar la afiliación indebida y mal uso de datos personales de los denunciantes.*

No pasa inadvertido que *MC* al responder al emplazamiento que le fue formulado, señaló, a manera de excepción, que no es una atribución del *INE* conocer sobre el tema relacionado con el uso de datos personales y, por tanto, se debería remitir el expediente al órgano competente para ello.

Contrario a lo manifestado por el denunciado, esta autoridad estima que si cuenta con competencia para conocer de asuntos relacionados con la afiliación indebida y, en consecuencia, el uso de datos personales, habida cuenta que ambas conductas se encuentran indefectiblemente relacionadas una con otra.

En efecto, si un ciudadano desea afiliarse a un ente político, en pleno ejercicio de su derecho de libre asociación política consagrado en los artículos 35 y 41 Constitucionales, es necesario que para ello proporcione sus datos personales para ese fin. *A contrario sensu*, si un ciudadano refiere haber sido afiliado indebidamente a un partido, es obvio concluir que también se encuentra comprometido el uso de datos personales por parte del partido para llevar a cabo su registro como militante.

Aunado a lo anterior, debe precisarse que las anteriores conclusiones han sido avaladas por el Consejo General de este Instituto al emitir las Resoluciones *INE/CG444/2018* e *INE/CG446/2018*, que resolvieron los procedimientos ordinarios sancionadores *UT/SCG/Q/JANC/CG/21/2017* e *UT/SCG/Q/RGG/CG/66/2017*.

Incluso, se debe precisar que la segunda de las resoluciones aludidas fue impugnada y confirmada por la *Sala Superior* al resolver expediente *SUP-RAP-141/2018*, en el que, entre otras cuestiones, determinó confirmar la resolución y, por ende, la sanción impuesta.

3. Fijación de la controversia

La controversia en el presente procedimiento, se constriñe a determinar si *MC* afilió o no, sin su consentimiento, a *Janeth Ríos Nolasco, Luis Alberto García Sosa, Juan Carlos Castillo Castillo, Yibi De Jesús Reyes Rivera, Xóchitl Irela Zavala Bojórquez y Blanca Estela González Regalado*, transgrediendo con ello lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II, 16 párrafo segundo, 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, así como 5, párrafo 1; 44, párrafo 2; 171 párrafo 3, 192, párrafo 2 y 342 párrafo, incisos a) y n) del *COFIPE*; 126, párrafos 3 y 4; 148, párrafo 2; 443, párrafo 1, incisos a), k) y n), de la *LGIPE*; y 2, párrafo 1, inciso b); 3, párrafo 2 y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *LGPP*.

4. Marco Normativo

A) Constitución, tratados internacionales y ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: ...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los

términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. *Son derechos del ciudadano:*

...

III. *Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;*

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa."

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la *Constitución*, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de

asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 de la *Constitución*— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán

afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 24/2002, emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES**.³²

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,³³ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal

³² Consultable en la página del *Tribunal Electoral* o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

³³ Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes —asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

“Artículo 23. Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como partido político nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:

I...

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.”

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito para constituirse como partido político nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o distritos electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que, en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;
- Que los estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
- Que era obligación de los partidos políticos nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGIPE*, que es obligación de los partidos políticos nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o distritos electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los partidos políticos nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o distritos electorales requeridos para su constitución y registro.

Así, de las disposiciones contenidas en los lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los partidos políticos nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los partidos políticos nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JRN/J/CD01/QROO/40/2018

- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.
- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que, en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el

instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los partidos políticos nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la *Constitución* y la *Ley*, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha

transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normatividad interna de MC

Derivado de lo anterior, particularmente de que la infracción presuntamente cometida por MC consiste precisamente en el incumplimiento de sus propias normas de afiliación, se hace necesario analizar éstas, a fin de conocer las condiciones en que se debe dar la incorporación de los ciudadanos al respectivo padrón de militantes.

“Estatutos de MC”

ARTÍCULO 3

De la Afiliación y la Adhesión

1. Todo ciudadano/a inscrito en el Registro Federal de Electores puede solicitar ya sea su afiliación como militante del MC, o su adhesión al mismo como simpatizante.

2. La afiliación y la adhesión son individuales, libres, pacíficas y voluntarias y se deben solicitar en la instancia del MC más próxima al domicilio del interesado.

...

4. Para afiliarse al MC se deberán suscribir los siguientes compromisos:

...

e) Llenar la solicitud respectiva en donde se manifieste su propósito de afiliarse y conste su firma o huella digital.

5. La credencial de militante del partido expedida por la Comisión Operativa Nacional testimonia la afiliación, el registro de aceptación y la inscripción regular de los militantes del MC.

Con relación a las normas transcritas, se obtiene lo siguiente:

- Por disposición constitucional y legal, sólo los ciudadanos mexicanos tienen el derecho político electoral de formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos.
- Afiliado o Militante es el ciudadano que en pleno goce y ejercicio de sus derechos político-electorales **se registra libre, voluntaria e individualmente a un partido político.**
- Pueden solicitar su afiliación o adhesión a *MC*, los jóvenes mayores de dieciocho años.
- Mayores de 14 años pueden solicitar su adhesión como simpatizantes del movimiento.
- La afiliación se debe solicitar en la instancia más cercana al domicilio del interesado

D) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la *Constitución* se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

5. Carga y estándar probatorio sobre indebida afiliación a un partido político

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante de *MC*, por regla general debe acudir a las instancias partidistas competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso *MC*), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que los ciudadanos en cuestión acudieron a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos

requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del *COFIPE*, precepto que, derivado de la reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la *LGPP*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que además los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JRN/J/CD01/QROO/40/2018

- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y voluntaria.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La emisión y operación de lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la *Sala Superior*, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**,³⁴ donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia 21/2013, de rubro **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,³⁵ el cual tiene distintas vertientes, entre las

³⁴ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_judiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

³⁵ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.

que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria³⁶ y como estándar probatorio.³⁷

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación³⁸ ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la *Sala Superior* consideró en la sentencia referida, que, para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciante sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.

³⁶ Tesis de Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

³⁷ Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. Véase la nota 35.

³⁸ Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO**.

- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con fundamento en el diverso 441 de la *LG/PE*, lo que implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento ordinario sancionador una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo

acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberadamente la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

6. Acreditación de los hechos

Como se ha mencionado, las denuncias presentadas por los afectados versan sobre la sobre la supuesta violación a su derecho de libertad de afiliación, al ser incorporados al padrón de *MC*, sin su consentimiento, así como la utilización de sus datos personales por dichos partidos políticos para sustentar tal afiliación.

Ahora bien, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de la infracción denunciada, debe precisarse lo siguiente:

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
1	Janeth Ríos Nolasco	02/febrero/2018	Correo electrónico de 21 de febrero de 2018, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, donde informa que la ciudadana se afilió a MC el 03/04/2012.	Oficio MC-INE-076/2018, firmado por el representante propietario de MC ante el Consejo General del INE, a través del cual informó que la denunciante se afilió a dicho partido político el 03/04/2012.
Conclusiones A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al existir un documento idóneo aportado por MC, se concluye que no se trata de una afiliación indebida, toda vez que el partido político aportó copia certificada de la cédula de afiliación respectiva y esta no fue objetada por la quejosa.				

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JRN/J/CD01/QROO/40/2018

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
2	Luis Alberto García Sosa	06/febrero/2018	Correo electrónico de 21 de febrero de 2018, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, donde informa que el ciudadano se afilió a MC el 06/01/2005.	Oficio MC-INE-076/2018, firmado por el representante propietario de MC ante el Consejo General del INE, a través del cual informó que el denunciante se afilió a dicho partido político el 06/01/2005.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al existir un documento idóneo aportado por MC, se concluye que no se trata de una afiliación indebida, toda vez que el partido político aportó copia certificada de la cédula de afiliación respectiva y esta no fue objetada por el quejoso.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
3	Juan Carlos Castillo Castillo	07/febrero/2018	Correo electrónico de 21 de febrero de 2018, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, donde informa que el ciudadano se afilió a MC el 18/05/2012.	Oficio MC-INE-076/2018, firmado por el representante propietario de MC ante el Consejo General del INE, a través del cual informó que el denunciante se afilió a dicho partido político el 18/05/2012.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al existir un documento idóneo aportado por MC, se concluye que no se trata de una afiliación indebida, toda vez que el partido político aportó copia certificada de la cédula de afiliación respectiva y esta no fue objetada por el quejoso.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
4	Yibi De Jesús Reyes Rivera	07/febrero/2018	Correo electrónico de 21 de febrero de 2018, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, donde informa que la ciudadana se afilió a MC el 05/11/2013 Y se canceló su registro el 19/12/2017.	Oficio MC-INE-076/2018, firmado por el representante propietario de MC ante el Consejo General del INE, a través del cual informó que la denunciante se afilió a dicho partido político el 05/11/2013 y que dicha ciudadana solicitó su baja del padrón de militantes de dicho partido la cual fue realizada conforme a los estatutos, procediendo a la baja
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al existir un documento idóneo aportado por MC, se concluye que no se trata de una afiliación indebida, toda vez que el partido político aportó copia certificada de la cédula de afiliación respectiva y esta no fue objetada por la quejosa.</p>				

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JRN/J/CD01/QROO/40/2018

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
5	Xóchitl Irela Zavala Bojórquez	08/febrero/2018	Correo electrónico de 21 de febrero de 2018, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, donde informa que la ciudadana se afilió a MC el 07/01/2014.	Oficio MC-INE-076/2018, firmado por el representante propietario de MC ante el Consejo General del INE, a través del cual informó que la denunciante se afilió a dicho partido político el 07/01/2014.
Conclusiones A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al existir un documento idóneo aportado por MC, se concluye que no se trata de una afiliación indebida, toda vez que el partido político aportó copia certificada de la cédula de afiliación respectiva y esta no fue objetada por la quejosa.				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
6	Blanca Estela González Mora	08/febrero/2018	Correo electrónico de 21 de febrero de 2018, enviado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, donde informa que la ciudadana se afilió a MC el 01/06/2014.	Oficio MC-INE-076/2018, firmado por el representante propietario de MC ante el Consejo General del INE, a través del cual informó que la denunciante se afilió a dicho partido político el 01/06/2014.
Conclusiones A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al existir un documento idóneo aportado por MC, se concluye que no se trata de una afiliación indebida, toda vez que el partido político aportó copia certificada de la cédula de afiliación respectiva y esta no fue objetada por la quejosa.				

➤ **Inclusión de denunciantes en el padrón de militantes de MC.**

Con relación al informe rendido por la *DEPPP*³⁹, se acreditó que se encuentran inscritos en el padrón de afiliados capturado por MC con corte al treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, Janeth Ríos Nolasco, Luis Alberto García Sosa, Juan Carlos Castillo Castillo, Blanca Estela González Regalado y Xóchitl Irela Zavala Bojórquez.

³⁹ Visible a fojas 67 a 69 del expediente.

Asimismo, *MC* refirió que los ciudadanos si se encuentran inscritos en su padrón de afiliados, adjuntando copia certificada de las cédulas de afiliación correspondientes.

Respecto a Yibi De Jesús Reyes Rivera, la *DEPPP* refirió que dicha ciudadana fue dada de baja el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Por su parte *MC* manifestó que dicha ciudadana presentó solicitud de baja del padrón de militantes, misma que fue realizada de conformidad con los Estatutos de *MC*.

Caso concreto

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por los quejosos, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5 del *COFIPE*, cuyo contenido se replica en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIFE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de derecho en específico; esto es, partido político, candidato o inclusive cualquier persona física o moral, es decir, la atribución de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

Ahora bien, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, la autoridad debe

contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión y, de ser el caso, determinar la responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad deberá analizar y ponderar el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley de Medios, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 340 del *COFIPE*, mismo que se reproduce con el diverso 441 de la *LGIPE*.

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que contaba con el consentimiento de los quejosos para afiliarlos a su partido político, y no a los ciudadanos que negaron haber solicitado su inclusión en el padrón de militantes de MC.

Como se observó en el apartado denominado *acreditación de hechos*, quedó demostrado, a partir de la información proporcionada por la *DEPPP*, así como de lo manifestado por el propio instituto político denunciado, que los ciudadanos quejosos se encontraron como afiliados en el padrón de militantes de *MC*.

Debiendo precisar que la carga de la prueba corresponde al denunciado, en tanto que el dicho de los actores consiste en que no dieron su consentimiento para ser afiliados, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba.

En lo tocante a la voluntad de los quejosos, como elemento indispensable para acreditar el libre ejercicio de su derecho de afiliación partidista, éstos niegan haber tenido o manifestado el propósito de afiliarse a *MC*, aduciendo que tuvieron

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JRN/J/CD01/QROO/40/2018

conocimiento de la existencia de su vínculo con el mencionado partido político, derivado de la compulsa realizada a los aspirantes para cargos de Supervisor Electoral y Capacitador Asistente Electoral para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.

En ese sentido, a fin de tener plena certeza respecto de la afiliación de dichos ciudadanos al partido político denunciado, esta autoridad formuló diversos requerimientos y remitió la clave de elector de los ciudadanos ya citados tanto al propio partido, como a la *DEPPP* para que compulsaran dicha información, con las constancias existentes en la base de datos y archivos correspondientes a *MC*, a fin de estar en posibilidad de localizar a dichos ciudadanos en el respectivo padrón de afiliados.

De las respuestas a los requerimientos formulados a la *DEPPP*, se advierte que en sus archivos se detectó que Janeth Ríos Nolasco, Luis Alberto García Sosa, Juan Carlos Castillo Castillo, Yibi De Jesús Reyes Rivera, Xóchitl Irela Zavala Bojórquez y Blanca Estela González, se encuentran afiliados a *MC*.

Asimismo, la referida Dirección Ejecutiva informó que no cuenta en sus archivos con la constancia de afiliación, en razón de que el proceso de verificación no incluye como requisito que los partidos políticos adjunten documentación que acredite el carácter de afiliados, salvo el caso de doble afiliación, por tanto, no existen en dicha Dirección Ejecutiva originales o copias certificadas legibles de las mismas.

En efecto, en el punto Décimo de los *“Lineamientos para la Verificación de los Padrones de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la Conservación de su Registro”*, se establece que la revisión del número mínimo de afiliados para que una organización partidista preserve tal calidad, se efectuará a partir de confrontar los datos inscritos en el respectivo padrón de afiliados y el padrón electoral federal con corte al treinta y uno de marzo del año previo a la jornada electoral federal; a partir de tal operación, denominada “primera compulsa”, al total de registros reportados por el partido político atinente, se descontarán los registros duplicados en el propio padrón partidista, de manera que el número de registros restantes serán denominados “registros únicos”.

Asimismo, en términos del mismo punto de los Lineamientos invocados, los “registros únicos” serán considerados “válidos” si efectivamente fueron localizados

en el padrón electoral y, por tanto, no causaron baja de éste por defunción, suspensión de derechos políticos, cancelación de solicitudes de trámite de credenciales para votar por no acudir a recogerlas, tratarse de registros duplicados en el propio padrón, no localizados en el mismo o registros con datos irregulares.

Por consiguiente, los referidos ciudadanos cuyos registros se detectaron por la *DEPPP* en el padrón de militantes de *MC*, en principio fueron considerados válidos, por no encontrarse en alguno de los supuestos que condujeran a ponerlo en entredicho durante la última verificación del mencionado padrón partidista.

Ahora bien, *MC*, con la finalidad de acreditar sus afirmaciones exhibió en el presente procedimiento las manifestaciones formales de afiliación de los ciudadanos quejosos.

Dichos medios de convicción, revisten el carácter de **documentales privadas**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 358, párrafo 3, inciso a), 359 párrafos 1 y 2 del *COFIPE*, cuyos artículos coinciden con los diversos 461, párrafo 3, inciso a) y 462 párrafos 1 y 2 de la *LGIPE*, en relación con el 22 párrafo 1, fracción I del Reglamento de Quejas.

En tal sentido, dichas manifestaciones formales de afiliación, son un indicio de que los citados ciudadanos fueron afiliados al instituto político en mención por voluntad propia.

En ese orden de ideas, mediante acuerdo de trece de abril de dos mil dieciocho, dictado por el Titular de la *Unidad Técnica*, se dio vista a los ciudadanos para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, y se pusieron a su disposición las constancias del expediente, particularmente la documentación que amparaba esas afiliaciones.

Empero, no se recibió respuesta alguna de dichos ciudadanos para determinar tal situación, aun y cuando fueron debidamente notificados.

Por esta razón, este Órgano Colegiado considera que las mencionadas constancias resultan suficientes para generar la presunción de que existió el consentimiento de los quejosos para afiliarse libremente al citado instituto político, toda vez que de su contenido se aprecian las firmas autógrafas presumiblemente de cada uno de ellos, de lo que se infiere que su solicitud para ser parte de *MC*, fue genuina.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JRN/J/CD01/QROO/40/2018

Por tanto, no existe evidencia objetiva que haga suponer que la afiliación a la que se refiere en este apartado, haya sido producto de una acción ilegal por parte de *MC*, concluyendo que dicho ente político, cumplió su carga probatoria para demostrar la afiliación voluntaria de los ciudadanos en cuestión y, ante ello, se considera que no es posible atribuir responsabilidad y la imposición de la consecuente sanción, pues existe la presunción a partir de la existencia de las cédulas de afiliación respectiva, de que en su momento hubo una afiliación voluntaria, presunción que como se dijo, no fue controvertida u objetada de manera frontal y directa, ni por la vía idónea, por parte de los ciudadanos ya referidos, no obstante de que en su momento estuvieron en la aptitud y garantía procesal de haberlo hecho; de ahí que resulte **infundado** el presente procedimiento.

Ahora bien, más allá de la determinación de responsabilidad a *MC* y la consecuente imposición de sanción, esta autoridad debe tutelar el derecho fundamental de afiliación de los quejosos, es decir, estamos frente a la defensa de un derecho humano de naturaleza político-electoral, que en términos del artículo 1° de la *Constitución* debe ser respetado, protegido y garantizado por todas las autoridades del Estado Mexicano.

En ese sentido, resulta indudable que la intención de dichos denunciantes es **no** pertenecer más como afiliados a *MC*.

Con base en ello, toda vez que la voluntad de Janeth Ríos Nolasco, Luis Alberto García Sosa, Juan Carlos Castillo Castillo, Xóchitl Irela Zavala Bojórquez, Blanca Estela González Mora, partes **denunciantes**, es no pertenecer a dicho partido político, se ordena a *MC*, para que, en el supuesto que los quejosos continúen en su padrón de afiliados, **sin mayor trámite**, cancele el registro de cada uno de ellos como sus militantes, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentaron sus escritos de renuncia o sus respectivas denuncias y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, las pruebas que amparen el cumplimiento.

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017, de cinco de enero de dos mil diecisiete, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al

ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el *INE*, que lo vincule con un instituto político en particular.

Por lo que hace a Yibi De Jesús Reyes Rivera, debe mencionarse que *MC*, mediante oficio MC-INE-076/2018, informó que dicha ciudadana fue dada de baja del padrón de afiliados del partido político en cita, circunstancia que fue corroborada por la *DEPPP*, al informar que dicha persona cuenta con registro de cancelación al ente político de referencia el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete.

QUINTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE LOS QUEJOSOS COMO MILITANTES. En tal sentido, se tiene que la voluntad de los denunciantes es no pertenecer a *MC*, por lo que se debe vincular al partido político, para que, de ser el caso, en el supuesto que los quejosos continúen en su padrón de militantes, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentó su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, los medios de prueba que amparen el cumplimiento.

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017⁴⁰, de cinco de enero de dos mil diecisiete, en donde se concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político a la *DEPPP*, a fin de que en el ámbito de sus atribuciones procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el *INE*; que lo vincule con un instituto político en particular.

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, amparado en el artículo 17 de la *Constitución*, se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del **recurso de apelación** previsto en el precepto 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

⁴⁰ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/JDC/2/SUP_2017_JDC_2-626321.pdf

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se **sobresee** el presente procedimiento administrativo sancionador, únicamente respecto de María del Carmen Jiménez Hernández, por las razones que se indican en el Considerando **TERCERO** de esta Resolución.

SEGUNDO. Se declara **infundado** el procedimiento sancionador ordinario incoado en contra de *MC*, por la afiliación indebida Janeth Ríos Nolasco, Luis Alberto García Sosa, Juan Carlos Castillo Castillo, Yibi De Jesús Reyes Rivera, Xóchitl Irela Zavala Bojórquez y Blanca Estela González, de conformidad con lo asentado en el Considerando **CUARTO** de esta Resolución.

TERCERO. Se vincula al partido político Movimiento Ciudadano para que, de ser el caso, en el supuesto de que los quejosos continúen en su padrón de afiliados, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente resolución con efectos, a partir de la fecha en que presentaron su escrito de denuncia**, y hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, las pruebas que amparen el cumplimiento, a fin de vigilar y corroborar el cumplimiento por parte del referido ente político, conforme a lo dispuesto en su Considerando **QUINTO**.

CUARTO. La presente resolución es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

NOTIFÍQUESE personalmente al partido político **Movimiento Ciudadano** y a Janeth Ríos Nolasco, María del Carmen Jiménez Hernández, Luis Alberto García Sosa, Juan Carlos Castillo Castillo, Yibi De Jesús Reyes Rivera, Xóchitl Irela Zavala Bojórquez, Blanca Estela González, y **por estrados** a quienes resulte de interés, con fundamento en los artículos 460 de la; Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 28, 29 y 30 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1251/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ORDINARIO
DENUNCIANTE: MIGUEL ÁNGEL DE
JESÚS SOTO MARTÍNEZ
DENUNCIADO: PARTIDO MORENA

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/MAJSM/CG/53/2018, INICIADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR MIGUEL ÁNGEL DE JESÚS SOTO MARTÍNEZ, A TRAVÉS DE LA CUAL HIZO DEL CONOCIMIENTO DE ESTA AUTORIDAD, HECHOS PRESUNTAMENTE CONTRAVENTORES DE LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, DERIVADA DE LA PRESUNTA INDEBIDA AFILIACIÓN AL PARTIDO POLÍTICO MORENA Y USO, SIN CONSENTIMIENTO, DE SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 12 de septiembre de dos mil dieciocho.

G L O S A R I O

Comisión	La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DEPPP	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
COFIPE	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MAJSM/CG/53/2018

IFE	El otrora Instituto Federal Electoral
Instituto o INE	Instituto Nacional Electoral
Ley de Medios	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
Ley de Partidos	Ley General de Partidos Políticos
LGIPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
MORENA	Partido MORENA
Quejoso o denunciante	Miguel Ángel de Jesús Soto Martínez
Reglamento de Quejas	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
Representante	Representante Propietario del Partido MORENA ante Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Sala Superior	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
UTCE	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE

R E S U L T A N D O

I. DENUNCIA.¹ El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, Miguel Ángel de Jesús Soto Martínez, interpuso escrito de queja en contra de MORENA, por presuntamente haber sido afiliado sin su consentimiento a dicho partido político, haciendo uso indebido de sus datos personales para tal fin, ocurso que se recibió en la *UTCE* el mismo día.

II. REGISTRO, ADMISIÓN, RESERVA DE EMPLAZAMIENTO Y DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Por acuerdo² de siete de marzo de dos mil dieciocho, la *UTCE* determinó, entre otras cuestiones, registrar la queja de mérito bajo el número de expediente citado al rubro; admitirla a trámite en la vía ordinaria; reservar el emplazamiento hasta en tanto se contara con mayores elementos para proveer al respecto y se requirió a la DEPPP y a MORENA a efecto de que

¹ Visible a fojas 1 a 2 del expediente

² Visible a fojas 3 a 10 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MAJSM/CG/53/2018

informaran si el quejoso fue afiliado a dicho Instituto político y, en su caso, señalaran la fecha de afiliación.

III. CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS. Mediante correo electrónico³ de nueve de marzo de dos mil dieciocho, el Titular de la *DEPPP* dio cumplimiento al requerimiento de información formulado por la *UTCE*, precisando que el hoy quejoso se encuentra afiliado al partido político denunciado, desde el veintiocho de abril de dos mil trece.

IV. CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO POR MORENA. El quince de marzo del año en curso, mediante oficio REPMORENAINE-099/18,⁴ en cumplimiento al requerimiento de información señalado en párrafos anteriores, MORENA manifestó que el hoy quejoso fue dado de alta en el padrón de militantes de dicho Instituto político, desde el veintiocho de abril de dos mil trece y fue dado de baja el seis de marzo de dos mil dieciocho.

V. EMPLAZAMIENTO.⁵ Mediante proveído de cuatro de abril de dos mil dieciocho, la *UTCE* emplazó a *MORENA*, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la conducta que se le imputó y aportara las pruebas que considerara pertinentes, corriéndose traslado con copia simple de las constancias que, hasta esa etapa procesal, integraban el presente expediente.

Dicho acuerdo se diligenció en los siguientes términos

Oficio	Fecha de notificación	Contestación al emplazamiento	Sentido de la respuesta
INE-UT/4069/2018 ⁶	5 de abril de 2018. ⁷ Se fijó en la puerta y se notificó por estrados	Oficio REPMORENAINE-158/18 ⁸ 11-04-2018	En lo medular, señaló que el quejoso se afilió de manera voluntaria y que el partido actuó de buena fe, máxime que el procedimiento de registro de afiliación puede realizarse por vía electrónica y, por tanto, no se cuenta con documentación soporte.

³ Visible a fojas 23 a 24 del expediente

⁴ Visible a fojas 25 a 27 del expediente

⁵ Visible a fojas 29 a 36 del expediente.

⁶ Visible a foja 45 del expediente

⁷ Visible a foja 52 a 54 del expediente.

⁸ Visible a fojas 55 a 62 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MAJSM/CG/53/2018

VI. ALEGATOS⁹. Mediante proveído de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, la *UTCE*, puso los autos a la vista de las partes, para que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera, acuerdo que se diligenció en los siguientes términos:

VII. ESCRITO DE DESISTIMIENTO. El catorce de mayo del año actual, Miguel Ángel de Jesús Soto Martínez presentó escrito¹⁰ a través del cual manifestó haber recibido la documentación correspondiente a su baja del padrón de militantes del partido denunciado, razón por la cual expresó su deseo de “allanarse” a lo manifestado por MORENA, a efecto de dar por concluido y archivar el presente expediente.

VIII. ESCRITO DE ALEGATOS. El mismo catorce de mayo, mediante escrito signado por su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,¹¹ en vía de alegatos, MORENA manifestó, en esencia, que no realizó ninguna afiliación indebida, que el quejoso se afilió de manera voluntaria, y que por tanto no utilizó sus datos personales para ese fin, además de que refiere que el partido actuó de buena fe, toda vez que el registro de afiliación puede realizarse por vía electrónica, y por tanto no se cuenta con documentación soporte.

IX. PREVENCIÓN. Mediante proveído de quince de junio del año en curso,¹² la Unidad Técnica previno al quejoso a efecto de que manifestara si era su voluntad desistirse la continuación del presente procedimiento y de la queja de veintiocho de febrero del presente.

X. CONTESTACIÓN A LA PREVENCIÓN. El veinte de junio inmediato siguiente,¹³ Miguel Ángel de Jesús Soto Martínez compareció para ratificar en cada una de sus partes el escrito presentado el catorce de mayo, a efecto de desistirse de la acción intentada contra MORENA, solicitando dar por concluido y archivar el presente expediente.

⁹ Visible a fojas 75 a la 78 del expediente

¹⁰ Visible a fojas 94 a la 97 del expediente

¹¹ Visible a fojas 98 a 104 del expediente

¹² Visible a fojas 115 a 119 del expediente

¹³ Visible a fojas 136 y 137 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MAJSM/CG/53/2018

ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, toda vez que no había diligencias pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la *Comisión*.

X. SESIÓN DE LA COMISIÓN. En la Octogésima Cuarta Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el seis de septiembre de dos mil dieciocho, la *Comisión* analizó y aprobó el proyecto, por unanimidad de votos de sus integrantes, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto de análisis en el presente procedimiento sancionador, consiste en la presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n); y 354, párrafo 1, inciso a), del *COFIPE* —disposiciones que se encuentran replicadas en los diversos 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *Ley de Partidos*, sí como 442, párrafo 1, inciso a) y 443, párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIPE*—, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte de *MORENA*, en perjuicio de Miguel Ángel de Jesús Soto Martínez.

En efecto, conforme al artículo 38, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido retomó el diverso 25, párrafo 1, inciso a), de la *Ley de Partidos*, los partidos políticos deben conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MAJSM/CG/53/2018

ciudadanos, correspondiendo al *INE* (otrora IFE) vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n); y 354, párrafo 1, inciso a) del Código citado en el párrafo anterior cuyas disposiciones se replican en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443, párrafo 1, incisos a) y n), y 456, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infringir las disposiciones contenidas en los ordenamientos legales a cuyo acatamiento se encuentran obligados, entre otras, la infracción al derecho de libre afiliación de los ciudadanos, a que se refieren los artículos 5 del COFIPE; y 2, párrafo 1, inciso b), y 3, párrafo 2, de la *LGIPE*.

En consecuencia, toda vez que corresponde a este órgano superior de dirección conocer de las infracciones a la normatividad electoral y, en su caso, imponer las sanciones atinentes, resulta competente para conocer y resolver respecto de la infracción denunciada, atribuida a MORENA, consistente, en esencia, en la presunta violación al derecho de libertad de afiliación y utilización indebida de datos personales del quejoso.

Al respecto, es de relevancia lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017, en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de militantes.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MAJSM/CG/53/2018

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIFE*, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, segundo párrafo, de la *Constitución*, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO

En el presente asunto se debe subrayar que la falta imputada a MORENA, presuntamente se cometió durante la vigencia del COFIPE, puesto que, según lo informado por la DEPPP y el partido denunciado, el registro de Miguel Ángel de Jesús Soto Martínez como militante del citado instituto político, supuestamente sucedió el veintiocho de abril de dos mil trece, fecha en la cual se encontraba vigente dicho código.

En este sentido, si de la información que obra en autos se desprende que al momento de la presunta falta se encontraba vigente el COFIPE, es claro que este ordenamiento legal debe aplicarse para las cuestiones sustantivas del presente procedimiento, al margen de que la falta hubiese sido advertida y cuestionada una vez que dicha norma fue abrogada por el LGIPE, así como que este último ordenamiento sea fundamento para cuestiones procesales o adjetivas.

Lo anterior tomando en consideración la interpretación sistemática, funcional y armónica de los artículos tercero y sexto transitorios del decreto por el que se expidió la LGIPE, a lo cual resulta orientadora la jurisprudencia de rubro **RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES**,¹⁴ emitida por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación.

TERCERO. SOBRESEIMIENTO.

En el presente asunto, durante la etapa de alegatos, el quejoso compareció por escrito ante la Unidad Técnica para manifestar su voluntad de desistirse de la continuación del presente asunto y de la queja presentada el veintiocho de febrero del presente año, escrito que fue ratificado en su oportunidad por el propio quejoso dentro del plazo concedido para tal efecto.

¹⁴ Consultable en el sitio: <https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/1012/1012265.pdf>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MAJSM/CG/53/2018

Al respecto, es importante señalar que el artículo 466, párrafo 3, de la *LGIPE*, establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento de una queja o denuncia deberán ser examinadas de oficio, por la Unidad Técnica, sustancialmente por tratarse de una cuestión de orden público.

En el mismo orden de ideas, en términos de lo previsto en los artículos 466, párrafo 2, inciso c), de la *LGIPE*; y 46, párrafo 3, fracción III, del *Reglamento de Quejas*, prevén como causa de sobreseimiento que **el denunciante se desista de su inconformidad**, siempre que tal circunstancia suceda antes este Consejo General resuelva la controversia, que no se trate de hechos graves y que no se vulneren los principios rectores de la función electoral.

Dichos preceptos —legal y reglamentario—, en lo que interesa, establecen lo siguiente:

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

“Artículo 466.

(...)

2. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

(...)

c) El denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y cuando lo exhiba antes de la aprobación del Proyecto de Resolución por parte de la Secretaría y que, a juicio de la misma, o por el avance de la investigación, no se trate de la imputación de hechos graves, ni se vulneren los principios rectores de la función electoral.”

3. El estudio de las causas de improcedencia o sobreseimiento de la queja o denuncia **se realizará de oficio**. En caso de advertir que se actualiza una de ellas, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva elaborará un Proyecto de Resolución por el que se proponga el desechamiento o sobreseimiento, según corresponda.

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral

“Artículo 46.

(...)

3. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

(...)

III. El denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y cuando lo exhiba antes de la aprobación del proyecto y que, a juicio de la Unidad Técnica, o por el avance de la investigación, no se trate de la imputación de hechos graves, ni se vulneren los principios rectores de la función electoral.”

En el caso que nos ocupa, obra en autos un escrito recibido en la Unidad Técnica el catorce de mayo del año en curso, a través del cual el quejoso, en esencia, manifestó su intención de dar por terminado el presente asunto, solicitando además su archivo definitivo, además de *allanarse* a la baja del padrón de militantes de MORENA que le fue notificada por correo electrónico, misma que adjuntó al escrito referido.

El contenido de dicho escrito, en lo que interesa, es del tenor siguiente:

...

*Que por medio del presente documento manifiesto que toda vez que el **Partido Morena** me ha enviado documento vía internet a mi correo electrónico lo siguiente:*

(Se transcribe)

*Por consiguiente solicito a Ud., que señale a quien corresponda que es mi voluntad expresa de **allanarme** a lo manifestado en dicho documento por **MORENA, cabe señalar que anexo copias fotostáticas simples de los documentos que menciono** que prueban lo manifestado por el que suscribe, por lo que solicito que se archive el presente expediente, y se dé por concluido este por las causas manifestadas, toda vez que el Partido demandado cumplió con lo solicitado.*

Subrayado añadido

Con motivo de lo anterior, atento a la trascendencia de la pretensión manifestada por el quejoso, cuyo efecto inmediato sería la conclusión del procedimiento sancionador, sin entrar al estudio del motivo de queja; y a efecto de tener certidumbre sobre la intención de Miguel Ángel de Jesús Soto Martínez, la

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MAJSM/CG/53/2018

autenticidad del documento y la identidad del signatario del ocurso, la Unidad Técnica acordó prevenir al quejoso para que ratificara su voluntad o realizara las manifestaciones que a sus intereses convinieran.

Derivado de lo anterior, el veinte de junio siguiente, el denunciante presentó nuevo escrito, ratificando el exhibido el catorce de mayo anterior, solicitando de nueva cuenta dar por terminado y archivar el presente asunto, por así convenir a sus intereses, tal y como se advierte de la transcripción del ocurso de marras, que se inserta enseguida:

...

*Y que por medio de este, vengo en tiempo y forma a desahogar la **PREVENCIÓN** que se ordenó en dicho acuerdo, en el sentido de que ratifique si es mi voluntad el escrito presentado por el que suscribe en fecha catorce (14) de mayo de dos mil dieciocho (2018); por lo tanto es mi voluntad manifestar lo siguiente: **RATIFICO DICHO ESCRITO**, así mismo, **ME DESISTO DE LA ACCIÓN INTENTADA en contra del PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), Y DE NUEVA CUENTA, SOLICITO QUE SE ARCHIVE EL PRESENTE EXPEDIENTE, Y SE DÉ POR CONCLUIDO**, por las causas manifestadas en el expediente y lo mencionado con anterioridad, toda vez(SIC), que es mi voluntad y derecho solicitarlo.*

Subrayado añadido.

De esa manera, este Consejo General cuenta con la certeza necesaria sobre la intención del quejoso de abandonar la tramitación del presente procedimiento ordinario sancionador, por así convenir a sus intereses.

Ahora bien, por cuanto a que los hechos denunciados no revistan gravedad, y que con su realización no se pudieran ver afectados los principios rectores de la función comicial, es necesario tener presente que el de afiliación a los partidos políticos, es un derecho personalísimo del ciudadano, puesto que es el único que puede decidir si desea afiliarse a un instituto político, permanecer afiliado, desafiliarse o no militar en ninguno.

En esa medida, es de considerarse que —en todo caso— es precisamente el ciudadano agraviado para quien pueden revestir gravedad los hechos denunciados, dado que es él quien ha de resentir las consecuencias de estos, pues los efectos de la presunta infracción material y jurídicamente no pueden trascender al

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MAJSM/CG/53/2018

electorado como colectividad, ni al ejercicio de la función electoral que tienen encomendadas las autoridades comiciales.

Lo anterior se robustece si se toma en consideración que, a la fecha, Miguel Ángel de Jesús Soto Martínez **ya no forma parte del padrón de militantes del partido denunciado**, conforme lo expresamente reconocido por el propio denunciante a través de los escritos antes reseñados, hecho que no está sujeto a prueba, conforme a lo establecido en el artículo 461, párrafo 1, de la LGIPE; y 26, párrafo 1, del *Reglamento de Quejas*, además de haber acompañado al escrito de catorce de mayo la impresión a color del formato de baja del padrón de militantes de MORENA.

Con base en el anterior, toda vez que se encuentran satisfechos los extremos a que se refieren los artículos 466, párrafo 2, inciso c), de la LGIPE; y 46, párrafo 3, fracción III del Reglamento de Quejas para la procedencia del desistimiento expresado por el quejoso, lo conducente es sobreseer el presente asunto.

CUARTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN.

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, previsto en el artículo 17 de la *Constitución*, se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación establecido en el artículo 42 de la Ley de Medios.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se SOBRESEE el presente asunto, en términos del Considerando **TERCERO** de esta Resolución.

SEGUNDO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42 de la Ley de Medios.

NOTIFÍQUESE: Personalmente a Miguel Ángel de Jesús Soto Martínez y a MORENA, a través de su representante propietario ante el Consejo General; y por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Ahora someto a su consideración en caso del Proyecto de Resolución 1.18 en lo general y excluyendo de la misma por lo que hace a la cuestión de la firma dentro del Proyecto de Resolución. _____

Señoras y señores Consejeros Electorales se consulta si se aprueba en lo general, el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en el orden del día como el apartado 1.18, excluyendo de esta votación en lo general por lo que hace a la firma. _____

Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo. _____

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello). _
Ahora someto a su consideración en el caso de este Proyecto de Resolución como viene el mismo, por lo que hace a la firma. _____

Quienes estén a favor, sírvanse en manifestarlo, si son tan amables. _____

8 votos. _____

¿En contra? _____

3 votos. _____

Aprobado por 8 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 3 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles). _____

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG1252/2018) Pto. 1.18 _____

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/QLVRC/JD07/NL/122/2018

INE/CG1252/2018

PROCEDIMIENTO	SANCIONADOR
ORDINARIO	
DENUNCIANTE:	LILIA VELIA ROCA CONTRERAS Y OTROS
DENUNCIADO:	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/QLVRC/JD07/NL/122/2018, INICIADO CON MOTIVO DE LA QUEJA PRESENTADA POR DIVERSOS CIUDADANOS, EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA INDEBIDA AFILIACIÓN Y, EN SU CASO, EL USO NO AUTORIZADO DE SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 12 de septiembre de dos mil dieciocho.

G L O S A R I O

<i>Comisión:</i>	La Comisión de Quejas y Denuncias del INE
<i>Consejo General:</i>	Consejo General del INE
<i>Constitución:</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<i>DEPPP:</i>	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/QLVRC/JD07/NL/122/2018

<i>DERFE:</i>	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE
<i>IFE:</i>	El otrora Instituto Federal Electoral
<i>Instituto o INE:</i>	Instituto Nacional Electoral
<i>Ley de Medios:</i>	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
<i>Ley de Partidos:</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>LGIPE:</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>PVEM:</i>	Partido Verde Ecologista de México
<i>Quejosos o denunciantes:</i>	Lilia Velia Roca Contreras, Esmeralda Carmela Estrada Juárez, Ma. del Rosario Tirado Medina, Juan Eligio Alemán Cruz y Jonathan Díaz Hernández
<i>Reglamento de Quejas:</i>	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
Representante	Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante Consejo General del Instituto Nacional Electoral
<i>Sala Superior:</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>UTCE:</i>	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE

R E S U L T A N D O

I. PRESENTACIÓN DE LAS QUEJAS. El dieciocho, diecinueve, veintitrés, veinticuatro y treinta de abril de dos mil dieciocho, se recibieron diversos oficios, firmados por los Vocales Ejecutivos y/o Secretarios de la Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en los estados de Nuevo León, Guanajuato, Jalisco y Querétaro, respectivamente, mediante los cuales remiten los escritos¹ de queja firmados por Lilia Velia Roca Contreras, Esmeralda Carmela Estrada Juárez, Ma. Del Rosario Tirado Medina, Juan Eligio Alemán Cruz y Jonathan Díaz Hernández, a través de los cuales denunciaron que supuestamente fueron afiliados de manera indebida al padrón de militantes del *PVEM*, y que, para ello, presuntamente se utilizaron sus datos personales sin su autorización.

II. REGISTRO, ADMISIÓN Y RESERVA DE EMPLAZAMIENTO. El nueve de mayo del año en curso,² el Titular de la *UTCE* instruyó la integración del expediente en que se actúa, el cual quedó registrado con la clave **UT/SCG/QLVRC/JD07/NL/122/2018**, como un procedimiento sancionador ordinario por la presunta indebida afiliación y el uso indebido de datos personales para ese fin.

En el acuerdo en cita, se admitió a trámite el procedimiento sancionador ordinario señalado con anterioridad y se ordenó reservar lo conducente respecto al emplazamiento, hasta en tanto concluyeran las diligencias de investigación ahí ordenadas.

Al respecto, debe precisarse que la indagatoria ordenada consistió en solicitar a la *DEPPP* informara si los *quejosos* se encontraban registrados dentro del padrón de afiliados del *PVEM* y, de ser el caso, proporcionara la fecha de tales afiliaciones; asimismo, se le requirió al citado instituto político para que informara si los referidos ciudadanos aparecían en su padrón de afiliados y, de ser el caso, remitiera copia certificada de las constancias en las que constara el consentimiento de los *denunciantes*, respecto de la afiliación materia de controversia.

Enseguida se da cuenta de las constancias aportadas en relación con tales requerimientos.

¹ Folio 01 a 33. En todos los casos, se alude al expediente que se resuelve.

² Visible a fojas 34 a 41.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/QLVRC/JD07/NL/122/2018

Respuesta de la DEPPP:³

Acuerdo de nueve de mayo de dos mil dieciocho				
No	Nombre del quejoso	Entidad	Oficio	Respuesta
1	Lilia Velia Roca Contreras	Nuevo León	INE-UT/6716/2018 ⁴	Afiliada al PVEM desde el 29/11/2016
2	Esmeralda Carmela Estrada Juárez	Nuevo León		Afiliada al PVEM desde el 08/11/2016
3	Ma. Del Rosario Tirado Medina	Guanajuato		Afiliada al PVEM desde el 08/11/2016
4	Jonathan Díaz Hernández	Querétaro		Afiliada al PVEM desde el 30/10/2016
5	Juan Eligio Alemán Cruz	Jalisco		Afiliada al PVEM desde el 27/09/2016, y cancelado su registro desde el 27/04/2018

Respuesta del PVEM.⁵

Acuerdo de nueve de mayo de dos mil dieciocho		
Oficio UTCE	estatus	Ciudadano
INE-UT/6715/2018 ⁶	cancelado	Lilia Velia Roca Contreras
	cancelado	Esmeralda Carmela Estrada Juárez
	cancelado	Ma. Del Rosario Tirado Medina
	cancelado	Jonathan Díaz Hernández
	cancelado	Juan Eligio Alemán Cruz

III. SOLICITUD DE PRÓRROGA. En razón de que el *PVEM* al dar contestación al requerimiento de información, manifestó, entre otras cuestiones, que: *Por lo que hace al original del formato de afiliación de los ciudadanos referidos en el listado anterior, así como la documentación soporte respecto de su baja en el padrón de afiliados, solicito por medio del presente una prorroga razonable para su entrega a esa autoridad electoral, en virtud de que la misma ya fue requerida a los Comités Ejecutivos Estatales correspondientes, razón por la cual requerimos de mayor tiempo para su presentación.*

IV. DILIGENCIA ADICIONAL. El dieciséis de mayo del año en curso,⁷ el Titular de la *UTCE* acordó otorgar un plazo improrrogable de tres días hábiles al *PVEM* para

³ Visible a fojas 55 a 57.

⁴ Visible a foja 54

⁵ Visible a foja 58

⁶ Visible a foja 53

⁷ Visible a fojas 66 a 69.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/QLVRC/JD07/NL/122/2018

el efecto de que entregue las fechas de alta en su padrón, así como el soporte de su baja del padrón y las constancias de afiliación.

Enseguida se da cuenta de las constancias aportadas en relación con tal requerimiento.

Respuesta del PVEM:⁸

Acuerdo dieciséis de mayo de dos mil dieciocho		
Oficio UTCE	Nombre del quejoso	Respuesta
INE- UT/7253/2018 ⁹	Lilia Velia Roca Contreras	Afiliada al PVEM, de fecha 29/09/2016 . Anexó original de la cédula de afiliación y documentación de baja del padrón de afiliados.
	Esmeralda Carmela Estrada Juárez	Afiliada al PVEM, de fecha 08/09/2016 . Anexó original de la cédula de afiliación y documentación de baja del padrón de afiliados.
	Ma. Del Rosario Tirado Medina	Afiliada al PVEM, de fecha 08/11/2016 . Anexó original de la cédula de afiliación y documentación de baja del padrón de afiliados.
	Jonathan Díaz Hernández	Afiliada al PVEM, sin precisar fecha. Anexó original de la cédula de afiliación y documentación de baja del padrón de afiliados.
	Juan Eligio Alemán Cruz	Afiliada al PVEM, sin precisar fecha. Anexó original de la cédula de afiliación y documentación de baja del padrón de afiliados.

V. EMPLAZAMIENTO. El veintiuno de junio del año en curso,¹⁰ se ordenó el emplazamiento al PVEM para efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de la conducta que se le imputó y aportara las pruebas que considerara pertinentes.

Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito.

⁸ Páginas 93 a 124.

⁹ Páginas 84

¹⁰ Acuerdo visible a fojas 141 a 145 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/QLVRC/JD07/NL/122/2018

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

EMPLAZAMIENTO				
CONSTANCIA CON LA CUAL SE MATERIALIZÓ LA DILIGENCIA	SUJETO EMPLAZADO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE CONTESTACIÓN AL EMPLAZAMIENTO	PRUEBAS OFRECIDAS
INE-UT/10066/2018 ¹¹	PVEM	Veinticinco de junio de dos mil dieciocho	Dos de julio de dos mil dieciocho ¹²	El partido político denunciado manifestó que los quejosos ejercieron libremente su derecho de asociación y afiliación, y como consta en autos se exhibieron originales de las cédulas de afiliación Como pruebas: la Instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana. ¹³

VI. ALEGATOS. El nueve de julio de dos mil dieciocho,¹⁴ se ordenó dar vista a las partes, a efecto de que en vía de alegatos manifestaran lo que a su derecho conviniera, asimismo, se ordenó dar vista a los quejosos con el formato de afiliación de cada uno de ellos, aportado por el partido político, mediante el cual intentó acreditar que las afiliaciones controvertidas se realizaron de conformidad con las disposiciones legales

El acuerdo de vista para alegatos, se diligenció en los siguientes términos:

ALEGATOS			
CONSTANCIA CON LA CUAL SE MATERIALIZÓ LA DILIGENCIA	SUJETO NOTIFICADO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE CONTESTACIÓN
INE-UT/11476/2018 ¹⁵	PVEM	12 de julio de 2018	18 de julio de 2018 ¹⁶
INE/VS/JDE07/NL/0744/2018 ¹⁷	Lilia Velia Roca Contreras	17 de julio de 2018	No contestó
INE/JDE01/NL/691/2018 ¹⁸	Esmeralda Carmela Estrada Juárez	16 de julio de 2018	No contestó
INE/GTO/JDE14-VE/1333/18 ¹⁹	Ma. Del Rosario Tirado Medina	12 de julio de 2018	No contestó
INE/CD02/QRO/2105/2018 ²⁰	Jonathan Díaz Hernández	16 de julio de 2018	No contestó

¹¹ Visible a foja 151.

¹² Visible a foja 163 a 186

¹³ Visible a fojas 141 a 145.

¹⁴ Visible a fojas 187 a 190.

¹⁵ Visible a foja 196.

¹⁶ Visible a fojas 217 a 241.

¹⁷ Visible a foja 243.

¹⁸ Visible a foja 252.

¹⁹ Visible a foja 208.

²⁰ Visible a foja 269.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/QLVRC/JD07/NL/122/2018

ALEGATOS			
CONSTANCIA CON LA CUAL SE MATERIALIZÓ LA DILIGENCIA	SUJETO NOTIFICADO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE CONTESTACIÓN
INE-JAL-JDE14-VS-0406-2018 ²¹	Juan Eligio Alemán Cruz	16 de julio de 2018	30 de julio de 2018 ²²

VII. ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, toda vez que no había diligencias pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la *Comisión*.

VIII. SESIÓN DE LA COMISIÓN. En la Octogésima Cuarta Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el seis de septiembre de dos mil dieciocho, la *Comisión de Quejas* analizó y aprobó el proyecto de mérito, por unanimidad de votos de sus integrantes; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto de análisis en el presente procedimiento sancionador, consiste en la presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b); 3, párrafo 2; 25, párrafo 1, incisos a), e) y u), y 29 de la *Ley de Partidos*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte del *PVEM*, en perjuicio de Lilia Velia Roca Contreras, Esmeralda Carmela Estrada Juárez, Ma. del Rosario Tirado Medina, Juan Eligio Alemán Cruz y Jonathan Díaz Hernández.

Ahora bien, conforme al artículo 44 párrafo 1, inciso j) de la *LGIPE*, los partidos políticos deben ajustar su conducta a las disposiciones establecidas en la

²¹ Visible a foja 277.

²² Visible a fojas 279 a 281.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/QLVRC/JD07/NL/122/2018

normatividad electoral, correspondiendo al *INE* vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la Ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 442, párrafo 1, inciso a); 443, párrafo 1, incisos a) y n), y 456, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho ordenamiento jurídico, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 25, párrafo 1, incisos a), e) y u), y 29 de la *Ley de Partidos*, así como la infracción a los derechos contenidos en los numerales 2, párrafo 1, inciso b), y 3, párrafo 2, del mismo ordenamiento jurídico, las cuales son sancionables por el *Consejo General*.

En consecuencia, toda vez que corresponde a este órgano superior de dirección conocer de las infracciones a la normatividad electoral y, en su caso, imponer las sanciones atinentes, en el particular, esta autoridad resulta competente para conocer y resolver respecto de la infracción denunciada, atribuida al *PVEM*, consistente, en esencia, en la presunta violación al derecho de libertad de afiliación y utilización indebida de datos personales.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,²³ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de militantes.

²³ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGPE*, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, segundo párrafo, de la *Constitución*, es decir, con base en el derecho humano a la libre asociación en su vertiente de afiliación política.

SEGUNDO. ESTUDIO DE FONDO

Como ha quedado dicho, el presente asunto derivó de la queja presentada por **cinco** ciudadanos en contra del *PVEM*, debido, en esencia, a que dicho partido político afilió a los quejosos sin que éstos prestaran su consentimiento para ello, haciendo para conseguirlo, uso indebido de sus datos personales.

1. EXCEPCIONES Y DEFENSAS.

En defensa de sus intereses, el *PVEM* manifestó, en esencia, que no infringió ninguna norma, ya que resulta falso que los ciudadanos Lilia Velia Roca Contreras, Esmeralda Carmela Estrada Juárez, Ma. del Rosario Tirado Medina, Juan Eligio Alemán Cruz y Jonathan Díaz Hernández, hayan sido afiliados sin su consentimiento, pues la voluntad de los ciudadanos quejosos, se encuentra de manifiesto con la firma que aparece en las constancias de afiliación.

Asimismo, cabe señalar que el **ciudadano quejoso, Juan Eligio Alemán Cruz**, señaló, en síntesis, que el formato de afiliación aportado por el *PVEM*, no fue llenado con su consentimiento, toda vez que como se precia en su identificación la firma de su persona no coincide con la misma, asimismo, respecto a la escolaridad que se establece en el mismo, esta no tiene razón, toda vez que mi grado académico es de licenciado desde mil novecientos ochenta y cinco.

Como se observa, las manifestaciones formuladas por el denunciado en defensa de sus intereses tienen que ver con la materia de la controversia y no con cuestiones de índole procesal, que impliquen una cuestión de previo y especial pronunciamiento, razón por la cual serán estudiadas al resolver el caso concreto.

2. FIJACIÓN DE LA LITIS

En el presente asunto se debe determinar si el *PVEM* afilió indebidamente o no a los ciudadanos que alegan no haber dado su consentimiento para estar en sus filas, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo

segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 443, párrafo 1, incisos a) y n); de la *LGIPE* en relación con los artículos 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e), y u), de la *Ley de Partidos*.

3. MARCO NORMATIVO

A) Constitución, Tratados Internacionales y Ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: ...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

...

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la

Constitución. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafilarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia **24/2002**, emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES**.²⁴

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

²⁴ Consultable en la página: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,²⁵ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentra consagrado a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

²⁵ Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/proclLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes — asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

***“Artículo 23.** Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:*

I...

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.”

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos

a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que, en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;
- Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
- Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política,

e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGIFE*, que es obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* del *IFE* por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *H. Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su constitución y registro.

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/QLVRC/JD07/NL/122/2018

- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que, en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cuál, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna del PVEM

Como se ha mencionado anteriormente, la obligación de los partidos políticos de garantizar el derecho de libre afiliación de sus agremiados, deviene de las propias disposiciones constitucionales, legales y convencionales a que se ha hecho

referencia párrafos arriba, por tanto, su cumplimiento, en modo alguno, se encuentra sujeto a las disposiciones internas que cada instituto tiene en su haber normativo.

No obstante, a efecto de tener claridad acerca del proceso que un ciudadano debe llevar a cabo para convertirse en militante del partido político ahora denunciado, se hace necesario analizar la norma interna del *PVEM*, para lo cual, enseguida se transcribe la parte conducente de sus Estatutos, en los términos siguientes:²⁶

Estatuto del Partido Verde Ecologista de México

CAPÍTULO II

De los Procedimientos para Afiliación de sus Militantes, Adherentes y de sus Simpatizantes

Artículo 2.- *El Partido Verde Ecologista de México, está abierto para todos los mexicanos, incluidos los jóvenes que se interesen, respeten y acepten la Declaración de Principios, el Programa de Acción, y los Estatutos del Partido, que colaboren en la defensa y protección del medio ambiente y coincidan con el principio básico de la democracia en el respeto de la decisión de la mayoría.*

Los mexicanos que así lo decidan podrán afiliarse libre e individualmente al Instituto Político de conformidad con las siguientes modalidades:

I.- *Militante, ciudadanos que se valoran como el principal activo del Partido Verde Ecologista de México; con el compromiso y la participación en la toma de decisiones, que contribuyen a definir el proyecto verde ecologista mexicano;*

II.- *Adherente, los mexicanos que contribuyen con el Partido Verde Ecologista de México para la realización de sus fines y objetivos mediante aportaciones intelectuales y de propaganda; y*

III.- *Simpatizante, los mexicanos que mantienen una voluntad activa de colaboración y se inscriben voluntariamente en un registro del correspondiente ámbito territorial; para recibir información de actividades, reuniones y participación en programas.*

La afiliación al Partido Verde Ecologista de México, es individual, personal, intransferible, libre y pacífica. En tal virtud y por tratarse de un Partido Político Nacional, en el cual sus afiliados, militantes, simpatizantes y adherentes participan en forma personal y voluntaria, en el ejercicio de las actividades políticas que se encuentran consideradas en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como prerrogativas de los ciudadanos, la simple afiliación a este Instituto Político de ninguna manera podrá generar derechos laborales.

Artículo 3.- *Para ser militante del Partido Verde Ecologista de México, es necesario ser ciudadano mexicano con el compromiso de lograr una sociedad más justa, solidaria e igualitaria, a través de la participación de las ideas y del trabajo, que definan y*

²⁶ Consultable en la dirección electrónica <http://actores-politicos.ine.mx/docs/actores-politicos/partidos-politicos/nacionales/documentos-basicos/estatutos-generales-pvem.pdf>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/QLVRC/JD07/NL/122/2018

configuren el proyecto político verde ecologista mexicano de transformación y búsqueda de una sociedad mejor y de una sana relación del hombre con su entorno natural.

Los militantes del Partido Verde Ecologista de México son aquellos ciudadanos que están en pleno ejercicio de sus derechos políticos y estatutarios y acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

I.- Estar registrado en el padrón de adherentes por un plazo no menor a dos años plenamente acreditados conforme al capítulo de afiliación de los presentes Estatutos. En los casos de haber sido dirigente, candidato o haber ocupado un cargo de elección popular postulado por otro Instituto Político, el plazo a cumplir no podrá ser inferior a por lo menos tres años a partir de su registro como adherente, salvo haber sido candidato de coalición o candidatura común con el Partido Verde Ecologista de México en cuyo caso el Consejo Político Nacional determinará si queda sin efecto lo previsto en la presente fracción y procede su registro como militante;

II.- Adquirir el compromiso de participar en forma permanente y disciplinada en la realización de los objetivos del Partido;

III.- Una vez cumplidos los requisitos anteriores y apoyado por un militante, solicitar por escrito su cambio de carácter al Comité Ejecutivo Estatal correspondiente, quien turnará dicha solicitud al Consejo Político Nacional para su aprobación, quien en su caso registrará su inclusión en el padrón nacional de militantes.

Los objetivos y actividades de los militantes, tienen como meta fundamental: forjar una sólida relación de identificación, de confianza y de credibilidad, con el electorado para hacer efectiva la alternativa de gobierno.

La calidad de militante solo puede ser restringida por incurrir en alguno de los supuestos previstos por el artículo 9, y en los capítulos XI y XII de este cuerpo normativo, previa resolución dictada por la Comisión Nacional de Honor y Justicia o en su caso por la Comisión Estatal de Honor y Justicia las cuales deberán otorgar la garantía de audiencia y cubrir todas las formalidades establecidas en los presentes Estatutos.

...

Artículo 6.- *Podrán afiliarse al Partido las personas que estén ejerciendo algún puesto de elección popular postulados por otro Partido político, ya sea en el ámbito federal, estatal o municipal, según sea el caso, solamente con el carácter de adherente, solicitando por escrito su afiliación al Comité Ejecutivo Estatal de su ámbito territorial, siempre y cuando presente renuncia por escrito al Partido que lo postuló. En el entendido, que la persona que se encuentre en este supuesto, solamente podrá tener el carácter de militante si reúne lo señalado en los presentes Estatutos.*

...

Artículo 69.- *Facultades del Comité Ejecutivo Estatal y del Distrito Federal, en cada una de las entidades federativas:*

Estará coordinado por el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal, quien será electo por el Consejo Político Estatal de entre uno de sus integrantes.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/QLVRC/JD07/NL/122/2018

I.- Administrar los padrones Estatales de adherentes y simpatizantes respectivamente, en la entidad federativa correspondiente;

II.- Registrar a los afiliados que tengan el carácter de adherentes y simpatizantes en el padrón Estatal que corresponda;

...

CAPÍTULO XVIII
Del Registro de Afiliación

Artículo 87.- *El presente capítulo tiene como finalidad regular los procesos de afiliación y participación de los militantes, adherentes y simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México a nivel nacional, estatal, municipal y delegacional.*

Artículo 88.- *El proceso de afiliación es responsabilidad del Consejo Político Nacional, que tiene la obligación de llevarlo a cabo con apego a la normatividad respectiva.*

Artículo 89.- *La administración del proceso de afiliación en materia de captura y expedición de constancias se delegará parcialmente a los Comités Ejecutivos Estatales y del Distrito Federal.*

El formato para la credencial de militante y constancia de adherente será único a nivel nacional y será determinado por el Comité Ejecutivo Nacional.

La credencial de militante tendrá una vigencia máxima de doce meses y deberá refrendarse en todos los casos a más tardar en el mes de febrero de cada año, ante el Comité Ejecutivo Estatal correspondiente con la aprobación del Consejo Político Nacional. El procedimiento de refrendo de credenciales estará condicionado a que el militante se encuentre al corriente en el pago de sus cuotas de aportación.

Las credenciales de militante contendrán sin excepción la firma autógrafa del Secretario Técnico y del Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo Nacional, previa aprobación de la emisión por el Consejo Político Nacional.

Artículo 90.- *El Consejo Político Nacional tomará las medidas pertinentes, para garantizar la adecuada prestación del servicio de afiliación e implementará los mecanismos expeditos para el adecuado desarrollo del proceso.*

Artículo 91.- *De la afiliación de los Militantes; Se consideran militantes del Partido los ciudadanos que cumpliendo con lo establecido por el artículo 3 de los presentes Estatutos, hayan obtenido ese carácter de acuerdo a las disposiciones de este capítulo.*

Se consideran militantes del Partido los ciudadanos que cumpliendo con lo establecido por el artículo 3 de los presentes Estatutos, hayan obtenido ese carácter de acuerdo a las disposiciones de este capítulo.

Artículo 92.- *Para solicitar la credencial como militante, el interesado deberá cumplir la totalidad de los siguientes requisitos:*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/QLVRC/JD07/NL/122/2018

I.- Tener el carácter de adherente con al menos dos años de antigüedad al día de la solicitud, si es que no ha sido dirigente, candidato o haya ocupado un cargo de elección popular postulado por otro Instituto Político, en el caso de que no se cumpliera lo anterior, el plazo no podrá ser inferior a cuatro años a partir de su registro como adherente;

II.- Presentarse personalmente ante el Comité Ejecutivo Estatal y entregar la solicitud correspondiente; y

III.- Haber participado en alguna de las actividades cívico políticas organizadas por los órganos competentes del Partido.

Artículo 93.- *El Comité Ejecutivo Estatal que reciba la solicitud de afiliación como militante, entregará al interesado el comprobante correspondiente que será la garantía de su trámite, procediendo a estudiar la solicitud, y en su caso enviarla al Consejo Político Nacional, para su dictaminación.*

Artículo 94.- *El Consejo Político Nacional podrá rechazar cualquier trámite de afiliación como militante, cuando éste implique manipulación interesada, o sea producto de presión, compromiso hacia terceros o promesa de beneficio personal, así como cuando el interesado haya incurrido en cualquiera de los supuestos contenidos en el capítulo XI, De las Sanciones, de los presentes Estatutos.*

Artículo 95.- *El Comité Ejecutivo Estatal correspondiente rechazará las solicitudes cuando:*

I.- El solicitante no reúna los requisitos establecidos en los Estatutos; o

II.- Demuestre que el solicitante ha incurrido en actos de indisciplina o conductas contrarias a los principios del Partido durante el tiempo de su adherencia.

Artículo 96.- *El Consejo Político Nacional como órgano superior en materia de afiliación, podrá revocar las propuestas de los Comités Ejecutivos Estatales, por incumplimiento a lo señalado en los presentes Estatutos.*

...

Artículo 103.- *Todos los adherentes tendrán una constancia que acredite su afiliación al Partido.*

La constancia de adherente será expedida por el Comité Ejecutivo Estatal, previo acuerdo en sesión del propio Comité.

Artículo 104.- *El registro de los simpatizantes se realizará en las sedes de los Comités Ejecutivos Estatales, comprendiendo por estos a los mexicanos que mantienen una voluntad activa de colaboración y se inscriben voluntariamente en un registro del correspondiente ámbito territorial; para recibir información de actividades, reuniones y participación en programas.*

Artículo 105.- *De conformidad con lo previsto por el artículo 7, base segunda fracciones III y XIII, de los presentes Estatutos, todos los militantes deberán ratificar su*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/QLVRC/JD07/NL/122/2018

milancia en el proceso que para tal efecto convocará en todo el país el Consejo Político Nacional, lo anterior en el entendido de que de no hacerlo dejarán de tener la calidad de militantes y se les considerará como inicio en la etapa de adherentes. Para poder participar en el proceso de ratificación de militancia se deberá estar al corriente en el pago de las cuotas de militante.

...

De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente:

- El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, fundamentalmente, en la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para decidir **libre e individualmente** si desean formar parte de los partidos y agrupaciones políticas.
- Afiliado o Militante es el ciudadano que libre, voluntaria e individualmente, acude a un partido político para solicitar su incorporación al padrón de militantes respectivo, a través de los documentos aprobados por los órganos partidistas correspondientes.
- Al *PVEM* podrán afiliarse los ciudadanos que, libre e individualmente, expresen su voluntad de integrarse al partido.
- Para obtener la afiliación al partido de referencia, se requiere, además de ser ciudadano mexicano y expresar **su voluntad libre, individual y pacífica de afiliarse** al Partido, **suscribir personalmente** la solicitud de alta como militante.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.

Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán contemplar en sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos.

D) Protección de datos personales

De los artículos 6, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

E) Carga y estándar probatorio sobre indebida afiliación a un partido político

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante del *PVEM*, por regla general debe acudir a las instancias partidistas competentes, **suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación**, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso particular el *PVEM*), **tienen la carga de conservar y resguardar**, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliados al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 párrafo 1, inciso c), de la *Ley de Partidos*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de las constancias idóneas para ese fin, y que los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos con esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y voluntaria.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la Sala Superior, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**,²⁷ donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Jurisprudencia 21/2013, de rubro: **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,²⁸ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria²⁹ y como estándar probatorio³⁰.

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación³¹ ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la Sala Superior consideró en la sentencia referida que, para superar la presunción de inocencia, en su

²⁷ http://www.te.gob.mx/Informacion_judiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

²⁸ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60

²⁹ Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

³⁰ Véase la jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. ²² Véase la nota 35.

³¹ Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO**.

vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la *Ley de Medios*, con fundamento en el diverso 441 de la *LGIPE*, lo que implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera **idónea** demuestra que una persona está afiliado voluntariamente a un partido **es la constancia de inscripción respectiva**, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento sancionador ordinario, una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino que conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

Al respecto, la Sala Superior sostuvo que **si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante**, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales **que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo**; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que **de manera insuperable** el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad de conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se

genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

Otro aspecto importante a tomar en consideración, radica en que, si el partido político cumple con la carga probatoria que corresponde a su afirmación en el sentido de que la afiliación cuestionada estuvo precedida del consentimiento del quejoso, es decir, si exhibe prueba suficiente sobre la legitimidad de la afiliación motivo de queja, debe considerarse que prevalece el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio.

Al respecto, cabe destacar que, si la autenticidad o el contenido de dicho documento es cuestionado por el quejoso, se debe estar a las disposiciones contenidas en la *LGIPE* y el *Reglamento de Quejas y Denuncias*, las cuales aluden a las reglas que deben observarse tratándose de la objeción de documentos, como parte del derecho contradictorio que les asiste a las partes, de oponerse o refutar las pruebas que ofrezcan o que se allegue la *UTCE* durante la secuela de un procedimiento ordinario sancionador.

Así, el artículo 24 del citado cuerpo normativo establece que:

- 1. Las partes podrán objetar las pruebas ofrecidas durante la sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores **ordinario** y especial, siempre y cuando se realice antes de la audiencia de desahogo.*
- 2. Para los efectos de lo señalado en el párrafo que antecede, las partes podrán objetar la autenticidad de la prueba o bien su alcance y valor probatorio **debiendo indicar** cuál es el aspecto que no se reconoce de la prueba o por qué no puede ser valorado positivamente por la autoridad, esto es, el motivo por el que a su juicio no resulta idóneo para resolver un punto de hecho.*
- 3. Para desvirtuar la existencia o verosimilitud de los medios probatorios ofrecidos, no basta la simple objeción formal de dichas pruebas, sino que es necesario señalar las razones correctas en que se apoya la objeción **y aportar***

elementos idóneos para acreditarlas, mismos que tenderán a invalidar la fuerza probatoria de la prueba objetada.

Énfasis añadido

Esto es, de conformidad con el precepto reglamentario previamente transcrito, **no basta con objetar de manera formal el medio de prueba ofrecido por el partido político para desvirtuar la existencia o verosimilitud de la constancia de afiliación, sino que es necesario señalar las razones correctas en que se apoya la objeción y, también, aportar en el momento procesal oportuno, los elementos idóneos para acreditar su objeción.**

Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia 4/2005³² de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes:

DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y PUEBLA, ESTA ÚLTIMA ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1998). En términos de lo dispuesto por los artículos 324 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 330 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, los documentos privados provenientes de las partes deben ser reconocidos expresa o tácitamente para que adquieran el valor probatorio que las propias legislaciones les otorgan. Ahora bien, ***esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio reiterado de que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que es necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción.*** Debido a que en las legislaciones adjetivas en cuestión no se establece ninguna regla específica sobre la carga probatoria en la hipótesis apuntada, para saber a quién corresponde dicha carga de la prueba sobre la objeción formulada, deben atenderse los hechos en que se funde la misma, aplicándose las reglas genéricas establecidas en los artículos 289 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 263 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, en cuanto a que ***a cada parte corresponde probar los hechos de sus pretensiones. Por tanto, si la objeción de un documento privado proveniente de los interesados base de sus pretensiones se funda en la circunstancia de no haber suscrito el documento el objetante, a él corresponde la carga de la prueba. Dicho de otra forma, quien invoca una situación jurídica está obligado a probar los hechos fundatorios en que aquélla descansa; por lo contrario, quien sólo quiere que las cosas***

³² Jurisprudencia 1a./J. 4/2005, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Página 266.

se mantengan en el estado que existen en el momento en que se inicia el juicio, no tiene la carga de la prueba, pues desde el punto de vista racional y de la lógica es evidente que quien pretende innovar y cambiar una situación actual, debe soportar la carga de la prueba.

Énfasis añadido

Bajo ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió, en concordancia con los preceptos invocados en líneas que anteceden, que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que debe ser necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción, es decir, que al objetante corresponde la carga de la prueba. A efecto de robustecer lo anterior, se citan criterios de diversos Tribunales Colegiados de Circuito, en los que se han pronunciado en tal sentido sobre el tema:

- ***DOCUMENTOS PRIVADOS. OBJECCIÓN A LOS.***³³
- ***DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. CONFORME AL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA.***³⁴
- ***DOCUMENTOS PRIVADOS. PARA NEGARLES VALOR PROBATORIO, NO BASTA LA SIMPLE OBJECCIÓN, SINO QUE DEBEN SEÑALARSE LAS CAUSAS EN QUE LA FUNDE Y DEMOSTRARLAS.***³⁵
- ***DOCUMENTOS PRIVADOS, CARGA DE LA PRUEBA EN CASO DE OBJECCIÓN A LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)***³⁶

³³ Jurisprudencia I.30c. J/8, Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, Página 423.

³⁴ Tesis Aislada XV.4o.12 C, Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, Página 3128.

³⁵ Jurisprudencia III. 10c. J/17, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Número 63, Marzo de 1993, Página 46.

³⁶ Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Agosto de 1993, Página 422.

- **DOCUMENTOS PRIVADOS. CARGA DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR LA OBJECCIÓN RESPECTO DE LA AUTENTICIDAD DE LA FIMA CONTENIDA EN ELLOS**³⁷
- **DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)**³⁸

De igual forma, resulta aplicable la Jurisprudencia I.3o.C. J/11³⁹, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes:

DOCUMENTOS PRIVADOS INSUFICIENTEMENTE OBJETADOS POR EL PROPIO FIRMANTE, VALOR PROBATORIO DE LOS. *En tratándose de documentos privados, debe hacerse la distinción entre aquellos que provienen de terceras personas y los que se atribuyen a las partes litigantes en la controversia. Respecto de los primeros, basta la objeción del instrumento privado, debidamente razonada, para que pierda su valor probatorio, quedando a cargo del oferente la carga de la prueba y apoyar su contenido aportando otros elementos de convicción, y en relación con el segundo supuesto, para tener por satisfecho lo dispuesto por el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es menester que **la parte a quien perjudique realice en tiempo, forma y suficiencia la objeción, para que pierda su alcance probatorio dicho instrumento. De esta manera, se tiene que si en un caso la contraparte del oferente, al dársele vista con el documento exhibido, se limitó a manifestar que no lo había firmado, tal aseveración no pudo constituir la causa suficiente de objeción que demeritara el alcance de esa probanza, ya que para tal efecto resulta indispensable que existan causas motivadoras de la invalidez de la prueba y que se aportaran las pruebas idóneas para tal fin, como pudieron ser las periciales grafoscópicas, grafológicas y caligráficas; elementos que no se rindieron para acreditar la impugnación, como lo dispone el artículo 341 del código citado.***

Énfasis añadido

³⁷ Tesis XXXI.3º 8 L, Tercer Tribunal Colegiado de Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, Página 1254.

³⁸ Tesis II. o C, 495 C, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Página 1454.

³⁹ Tesis I.3o. C J/11, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de 1997, Página 615.

En igual sentido, el Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito en la Jurisprudencia III.1o.C. J/29⁴⁰, sostuvo el referido criterio en el siguiente sentido:

DOCUMENTOS PRIVADOS, PRUEBA DE LA FALSEDAD DE LA FIRMA DE LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Una interpretación armónica de los artículos 342, 343, 344, 345, 346 y 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, lleva a concluir que cuando se objeta la autenticidad de la firma de un documento privado es necesario pedir el cotejo de la misma con una señalada como indubitable; además, debe ofrecerse la prueba pericial respectiva, dado que la falsificación de la firma es un punto que sólo puede ser determinado por una persona con conocimientos especiales en la materia, es decir, por un perito grafógrafo, aun cuando exista diferencia notoria entre las firmas cuestionadas, porque tal circunstancia, por sí sola, no revela lo apócrifo de una de ellas, sino únicamente la diferencia entre ambas.

Énfasis añadido

Lo anterior, en suma, significa que para desvirtuar la presunción de inocencia que surge en favor del denunciado cuando aporta elementos de prueba idóneos para demostrar que la afiliación cuestionada estuvo precedida de la manifestación de voluntad del quejoso, tal como las constancias de afiliación correspondientes, o bien, elementos que pongan de manifiesto que el quejoso realizó hechos positivos derivados de su militancia, no basta que, de manera abstracta y genérica, el quejoso afirme que dichos medios de convicción no son veraces o auténticos.

Lo anterior, atento que, conforme a la normatividad que rige los procedimientos sancionadores electorales y que inexcusablemente está obligado a seguir este Consejo General, resulta imperativo que quien objeta un medio de prueba, señale específicamente cuál es la parte que cuestiona, y al efecto aporte, o cuando menos señale, conforme a la regla general relativa a que a quien afirma le corresponde probar —vigente en los procedimientos sancionadores electorales conforme a lo establecido por la Sala Superior—, los elementos objetivos y ciertos que puedan conducir a destruir la eficacia probatoria de los elementos aportados por el denunciado en su defensa, pues de otra manera, el principio de presunción de inocencia deberá prevalecer apoyado en las evidencias allegadas al procedimiento por el presunto responsable.

⁴⁰ Jurisprudencia III.1o.C. J/29, Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Página 680.

4. HECHOS ACREDITADOS Y PRECISIONES

En principio, es importante considerar que la responsabilidad administrativa atribuida al infractor de una norma electoral, debe estar sustentada en dos principios que constituyen la base objetiva de todo procedimiento sancionador: por un lado, la existencia fáctica de la conducta prevista como falta en la norma; y por otro, la responsabilidad del sujeto a quien se le atribuye dicha conducta, esto es, el nexo causal que debe quedar demostrado entre la realización de la conducta infractora y la responsabilidad en su comisión por el presunto infractor.

Así, a efecto de determinar la legalidad o ilegalidad de los hechos cuestionados y la responsabilidad atribuida al partido denunciado, se verificará en principio, la existencia de los mismos y las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se materializaron, a partir del acervo probatorio que obra en el sumario, mismo que se integra por los elementos siguientes:

- a) **Documental pública**, consistente en la impresión del correo electrónico de catorce de mayo de dos mil dieciocho,⁴¹ recibido de la cuenta institucional patricio.ballados@ine.mx, correspondiente al Director de la *DEPPP*, mediante el cual se informó a la *UTCE* que cuatro los hoy quejosos se encuentran afiliados al *PVEM*, así como la fecha en que ello aconteció, y por lo que hace a uno de ellos -Juan Eligio Alemán Cruz- se reporta con estatus de cancelado.
- b) **Documentales privadas** consistentes en originales de las cédulas de afiliación de Lilia Velia Roca Contreras, Esmeralda Carmela Estrada Juárez, Ma. del Rosario Tirado Medina, Juan Eligio Alemán Cruz y Jonathan Díaz Hernández al *PVEM*, de las cuales se advierten las afiliaciones cuestionadas, así como las fechas en que se realizaron.

En torno a los medios de convicción citados, la documental pública indicada en el inciso a), cuenta con valor probatorio pleno, por provenir de un funcionario electoral en el ejercicio de sus atribuciones, tal como lo prevén los artículos 462, párrafo 2, de la *LGIFE*; y 27, párrafo 2, del *Reglamento de Quejas*, mientras que la documental privada referida en el inciso b) sólo hará prueba plena cuando, al ser valorada por este Consejo General, y concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio

⁴¹ Visible a fojas 55 a 57.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/QLVRC/JD07/NL/122/2018

de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos a que se refieren, con base en lo establecido en los artículos 462, párrafo 3, de la *LGPE*; y 27, párrafo 3, del *Reglamento de Quejas*.

Así las cosas, de los medios de prueba referidos se puede colegir los siguiente:

Lilia Velia Roca Contreras		
Quejosa	Información proporcionada por la DEPPP⁴²	Manifestaciones del Partido Político⁴³
La denunciante afirma que desconoce el motivo por el cual se le afilió al <i>PVEM</i> , presentó inconformidad con la afiliación a dicho instituto político.	Informó, que la denunciante está afiliada al <i>PVEM</i> con fecha de alta el <u>veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis.</u>	Informó que la quejosa ejerció de manera libre, su derecho de asociación y de afiliación, con fecha de alta el <u>veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis,</u> anexó original de la cédula de afiliación.
Observaciones		
<p>El partido político denunciado aportó original de la cédula de afiliación, en la que aparecen los datos de la denunciante, los cuales tienen coincidencia con los datos que aparecen en la credencial para votar de la quejosa, además de contener, aparentemente, su firma autógrafa.</p> <p>En uno de los apartados de la cédula de afiliación exhibida por el denunciado, se advierte la fecha de afiliación del denunciante (29 de septiembre de 2016), lo cual, se estima, que aún y cuando no coincide el mes de afiliación, el acto en sí, no se contrapone con lo informado por la <i>DEPPP</i>, en el sentido que el quejoso aparece como militante del partido político denunciado desde ese año, ya que éste también así lo refiere.</p> <p>Es importante destacar que en la parte superior de la firma que aparece en la cédula de afiliación se puede ver la leyenda: <i>Manifiesto mi libre interés de ser inscrito en el Padrón de Afiliados del Partido Verde Ecologista de México, comprometiéndome a contribuir a la realización de sus objetivos. Declaro bajo protesta de decir verdad que no tengo afiliación con ninguna otra Asociación y/o Partido Político.</i></p>		
Conclusiones		
<p>Del análisis vertido respecto a la información y pruebas recabadas, se puede concluir lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lilia Velia Roca Contreras fue registrada como militante del <i>PVEM</i>; 2. La afiliación mencionada tuvo lugar el 29 de noviembre de 2016. 		

⁴² Enviada vía correo electrónico, visible a fojas 23 a 24.

⁴³ Visible a fojas 25 a 28.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/QLVRC/JD07/NL/122/2018

3. El *PVEM* aportó elementos a partir de los cuales esta autoridad concluye que la afiliación de la quejosa a dicho partido se realizó conforme con las disposiciones legales y estatutarias aplicables

De acuerdo a la información proporcionada por la *DEPPP* y el *PVEM*, no existe controversia en el sentido de que la **denunciante fue militante del referido instituto político**, información que en momento alguno fue objetada por la quejosa, lo anterior en razón de que no desahogó la vista formulada para que en vía de alegatos manifestara lo que a su derecho conviniera, no obstante de haber sido notificada debidamente, por lo cual, es que **NO** se advierte que se hayan utilizado indebidamente sus datos personales, ni que la misma haya sido indebidamente afiliado a dicho instituto político.

Esmeralda Carmela Estrada Juárez		
Quejosa	Información proporcionada por la DEPPP ⁴⁴	Manifestaciones del Partido Político ⁴⁵
La denunciante afirma que desconoce la afiliación al <i>PVEM</i> , presentó inconformidad con la afiliación a dicho instituto político.	Informó, que la denunciante está afiliado al <i>PVEM</i> con fecha de alta el <u>ocho de noviembre de dos mil dieciséis.</u>	Informó que la quejosa ejerció de manera libre, su derecho de asociación y de afiliación, con fecha de alta el <u>ocho de septiembre de dos mil dieciséis</u> , anexó original de la cédula de afiliación.
Observaciones		
El partido político denunciado aportó original de la cédula de afiliación, en la que aparecen los datos de la denunciante, los cuales tienen coincidencia con los datos que aparecen en la credencial para votar de la quejosa, además de contener, aparentemente, su firma autógrafa.		
En uno de los apartados de la cédula de afiliación exhibida por el denunciado, se advierte la fecha de afiliación del denunciante (08 de septiembre de 2016), lo cual, se estima, que aún y cuando no coinciden el mes de afiliación, el acto en sí, no se contrapone con lo informado por la <i>DEPPP</i> , en el sentido que la quejosa aparece como militante del partido político denunciado desde ese año, ya que éste también así lo refiere.		
Es importante destacar que en la parte superior de la firma que aparece en la cédula de afiliación se puede ver la leyenda: <i>Manifiesto mi libre interés de ser inscrito en el Padrón de Afiliados del Partido Verde Ecologista de México, comprometiéndome a contribuir a la realización de sus objetivos. Declaro bajo protesta de decir verdad que no tengo afiliación con ninguna otra Asociación y/o Partido Político.</i>		
Conclusiones		
Del análisis vertido respecto a la información y pruebas recabadas, se puede concluir lo siguiente:		
1. Esmeralda Carmela Estrada Juárez fue registrada como militante del <i>PVEM</i> ;		
2. La afiliación mencionada tuvo lugar el 08 de noviembre de 2016;		

⁴⁴ Enviada vía correo electrónico, visible a fojas 23 a 24.

⁴⁵ Visible a fojas 25 a 28.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/QLVRC/JD07/NL/122/2018

3. El *PVEM* aportó elementos a partir de los cuales esta autoridad concluye que la afiliación de la quejosa a dicho partido se realizó conforme con las disposiciones legales y estatutarias aplicables

De acuerdo a la información proporcionada por la *DEPPP* y el *PVEM*, no existe controversia en el sentido de que la **denunciante fue militante del referido instituto político**, información que en momento alguno fue objetada por la quejosa, lo anterior en razón de que no desahogó la vista formulada para que en vía de alegatos manifestara lo que a su derecho conviniera, no obstante de haber sido notificada debidamente, por lo cual, es que **NO** se advierte que se hayan utilizado indebidamente sus datos personales, ni que la misma haya sido indebidamente afiliado a dicho instituto político.

Ma. del Rosario Tirado Medina		
Quejosa	Información proporcionada por la <i>DEPPP</i> ⁴⁶	Manifestaciones del Partido Político ⁴⁷
La denunciante afirma que en ningún momento se afilió al <i>PVEM</i> , presentó inconformidad con la afiliación a dicho instituto político.	Informó, que la denunciante está afiliado al <i>PVEM</i> con fecha de alta el <u>ocho de noviembre de dos mil dieciséis.</u>	Informó que la quejosa ejerció de manera libre, su derecho de asociación y de afiliación, con fecha de alta el <u>ocho de noviembre de dos mil dieciséis,</u> anexó original de la cédula de afiliación.
Observaciones		
El partido político denunciado aportó original de la cédula de afiliación, en la que aparecen los datos de la denunciante, los cuales tienen coincidencia con los datos que aparecen en la credencial para votar de la quejosa, además de contener, aparentemente, su firma autógrafa.		
En uno de los apartados de la cédula de afiliación exhibida por el denunciado, se advierte la fecha de afiliación del denunciante (08 de noviembre de 2016), lo cual, se estima, no se contrapone con lo informado por la <i>DEPPP</i> .		
Es importante destacar que en la parte superior de la firma que aparece en la cédula de afiliación se puede ver la leyenda: <i>Manifiesto mi libre interés de ser inscrito en el Padrón de Afiliados del Partido Verde Ecologista de México, comprometiéndome a contribuir a la realización de sus objetivos. Declaro bajo protesta de decir verdad que no tengo afiliación con ninguna otra Asociación y/o Partido Político.</i>		
Conclusiones		
Del análisis vertido respecto a la información y pruebas recabadas, se puede concluir lo siguiente:		
1. Ma. del Rosario Tirado Medina fue registrada como militante del <i>PVEM</i> ;		
2. La afiliación mencionada tuvo lugar el 08 de noviembre de 2016;		

⁴⁶ Enviada vía correo electrónico, visible a fojas 23 a 24.

⁴⁷ Oficio ES/CDN/INE-RP/0380/2018, visible a fojas 25 a 28.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/QLVRC/JD07/NL/122/2018

3. El PVEM aportó elementos a partir de los cuales esta autoridad concluye que la afiliación de la quejosa a dicho partido se realizó conforme con las disposiciones legales y estatutarias aplicables

De acuerdo a la información proporcionada por la *DEPPP* y el *PVEM*, no existe controversia en el sentido de que la **denunciante fue militante del referido instituto político**, información que en momento alguno fue objetada por la quejosa, lo anterior en razón de que no desahogó la vista formulada para que en vía de alegatos manifestara lo que a su derecho conviniera, no obstante de haber sido notificada debidamente, por lo cual, es que **NO** se advierte que se hayan utilizado indebidamente sus datos personales, ni que la misma haya sido indebidamente afiliado a dicho instituto político.

Juan Eligio Alemán Cruz		
Quejoso	Información proporcionada por la DEPPP ⁴⁸	Manifestaciones del Partido Político ⁴⁹
El denunciante afirma que nunca presentó ninguna afiliación al <i>PVEM</i> , presentó inconformidad con la afiliación a dicho instituto político.	Informó, que el denunciante fue afiliado al <i>PVEM</i> con fecha de alta el <u>veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis</u> . Cancelado: veintisiete de abril del año en curso.	Informó que el quejoso ejerció de manera libre, su derecho de asociación y de afiliación, sin precisar fecha de alta, anexó original de la cédula de afiliación.
Observaciones		
El partido político denunciado aportó original de la cédula de afiliación, en la que aparecen los datos del denunciante, los cuales tienen coincidencia con los datos que aparecen en la credencial para votar del quejoso, además de contener, aparentemente, su firma autógrafa.		
Se advierte que, de conformidad a lo informado por la <i>DEPPP</i> , el quejoso fue afiliado al <i>PVEM</i> el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis y que su cancelación al mismo fue el veintisiete de abril del año en curso.		
Es importante destacar que en la parte superior de la firma que aparece en la cédula de afiliación se puede ver la leyenda: <i>Manifiesto mi libre interés de ser inscrito en el Padrón de Afiliados del Partido Verde Ecologista de México, comprometiéndome a contribuir a la realización de sus objetivos. Declaro bajo protesta de decir verdad que no tengo afiliación con ninguna otra Asociación y /o Partido Político.</i>		
Conclusiones		
Del análisis vertido respecto a la información y pruebas recabadas, se puede concluir lo siguiente:		
1. Juan Eligio Alemán Cruz fue registrado como militante del <i>PVEM</i> ;		
2. La afiliación mencionada tuvo lugar el 27 de septiembre 2016;		

⁴⁸ Enviada vía correo electrónico, visible a fojas 23 a 24.

⁴⁹ Oficio ES/CDN/INE-RP/0380/2018, visible a fojas 25 a 28.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/QLVRC/JD07/NL/122/2018

3. El *PVEM* aportó elementos a partir de los cuales esta autoridad concluye que la afiliación de el quejoso a dicho partido se realizó conforme con las disposiciones legales y estatutarias aplicables

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del *PVEM* y que el partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria, original del formato de afiliación, asimismo, cabe referir que el ciudadano quejoso objetó dicho documento de forma lisa y llana.

Lo anterior, toda vez que el quejoso en respuesta a la vista (con el formato de afiliación), refirió *dicho documento no fue llenado con mi consentimiento, toda vez que como se precia en mi identificación la firma de mi persona no coincide con la misma adjuntando copia simple de mi credencial para votar para efecto de cotejar la misma, asimismo, respecto a la escolaridad que se establece en el mismo, esta no tiene razón, toda vez que mi grado académico es de licenciado desde 1985. Sin otro particular solicito ante este órgano electoral se tomen medidas pertinentes (sic) para garantizar los derechos privados de las personas, sancionado al partido en cito, por la falsificación de documentos personales.*

Jonathan Díaz Hernández		
Quejoso	Información proporcionada por la DEPPP ⁵⁰	Manifestaciones del Partido Político ⁵¹
El denunciante afirma que nunca dio su autorización o haya solicitado la afiliación al <i>PVEM</i> , presentó inconformidad con la afiliación a dicho instituto político.	Informó, que el denunciante está afiliado al <i>PVEM</i> con fecha de alta el <u>treinta de octubre de dos mil dieciséis.</u>	Informó que el quejoso ejerció de manera libre, su derecho de asociación y de afiliación, sin precisar fecha de alta, anexó original de la cédula de afiliación.
Observaciones		
<p>El partido político denunciado aportó original de la cédula de afiliación, en la que aparecen los datos del denunciante, los cuales tienen coincidencia con los datos que aparecen en la credencial para votar del quejoso, además de contener, aparentemente, su firma autógrafa.</p> <p>Se advierte que, en el apartado de la cédula de afiliación exhibida por el denunciado, aparece en blanco la fecha de afiliación del denunciante, sin embargo, se estima que no se contrapone con lo informado por la <i>DEPPP</i>.</p> <p>Es importante destacar que en la parte superior de la firma que aparece en la cédula de afiliación se puede ver la leyenda: <i>Manifiesto mi libre interés de ser inscrito en el Padrón de Afiliados del Partido Verde Ecologista de México, comprometiéndome a contribuir a la realización de sus objetivos. Declaro bajo protesta de decir verdad que no tengo afiliación con ninguna otra Asociación y /o Partido Político.</i></p>		

⁵⁰ Enviada vía correo electrónico, visible a fojas 23 a 24.

⁵¹ Oficio ES/CDN/INE-RP/0380/2018, visible a fojas 25 a 28.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/QLVRC/JD07/NL/122/2018

Conclusiones
Del análisis vertido respecto a la información y pruebas recabadas, se puede concluir lo siguiente:
1. Jonathan Díaz Hernández fue registrado como militante del <i>PVEM</i> ;
2. La afiliación mencionada tuvo lugar el 30 de octubre de 2016;
3. El <i>PVEM</i> aportó elementos a partir de los cuales esta autoridad concluye que la afiliación de el quejoso a dicho partido se realizó conforme con las disposiciones legales y estatutarias aplicables
De acuerdo a la información proporcionada por la <i>DEPPP</i> y el <i>PVEM</i> , no existe controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del referido instituto político , información que en momento alguno fue objetada por el quejoso, lo anterior en razón de que no desahogó la vista formulada para que en vía de alegatos manifestara lo que a su derecho conviniera, no obstante de haber sido notificado debidamente, por lo cual, es que NO se advierte que se hayan utilizado indebidamente sus datos personales, ni que el mismo haya sido indebidamente afiliado a dicho instituto político.

En este sentido, a partir del contenido de los medios de prueba antes citados, de su relación con los hechos afirmados por las partes y la verdad conocida, este Consejo General arriba a las siguientes conclusiones:

- Conforme a lo informado por la *DEPPP* y lo reconocido por el *PVEM*, los hoy quejosos, Juan Eligio Alemán Cruz, Jonathan Díaz Hernández, Esmeralda Carmela Estrada Juárez, Ma. del Rosario Tirado Medina, y Lilia Velia Roca Contreras, fueron afiliados al citado partido político en las siguientes fechas:

No.	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE (S)	ENTIDAD	FECHA DE AFILIACIÓN
1	ROCA	CONTRERAS	LILIA VELIA	NUEVO LEON	29/11/2016
2	ESTRADA	JUAREZ	ESMERALDA CARMELA	NUEVO LEON	08/11/2016
3	TIRADO	MEDINA	MA DEL ROSARIO	GUANAJUATO	08/11/2016
4	DIAZ	HERNANDEZ	JONATHAN	QUERETARO	30/10/2016

Asimismo, cabe señalar que por lo que hace a un ciudadano se canceló su registro, lo anterior de conformidad a lo siguiente:

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE (S)	ENTIDAD	FECHA DE AFILIACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN
ALEMAN	CRUZ	JUAN ELIGIO	JALISCO	27/09/2016	27/04/2018

- Derivado que la incorporación al padrón de afiliados de los hoy quejosos es un hecho reconocido por las partes, y constatado por la *DEPPP*, el tema a debate lo constituye la legalidad o ilegalidad de dichas afiliaciones, lo que habrá de determinarse dependiendo de la existencia del consentimiento de sus titulares o de la ausencia de éste.

5. CASO CONCRETO

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por los quejosos, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGPE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; esto es, **partido político**, candidato o inclusive cualquier persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra, su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

Ahora bien, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, la autoridad debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/QLVRC/JD07/NL/122/2018

de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

Así, en consonancia con lo hasta aquí razonado, se tiene que la carga de la prueba respecto a que la afiliación materia de queja fue voluntaria, cuando en tal circunstancia se basa la defensa del partido político denunciado, corresponde a éste; mientras que la demostración de la objeción a la veracidad o autenticidad de dichas constancias corresponde a los quejosos, pues de otra forma, deberá prevalecer la presunción de inocencia que asiste al partido político.

Así, en un primer momento, está demostrado, a partir de la información proporcionada por la *DEPPP*, así como de lo reconocido por el *PVEM* y de la constancias de afiliación aportadas por el denunciado, que los quejosos fueron afiliados al partido político el 27 de septiembre, 30 de octubre, 8 de noviembre y 29 de noviembre de dos mil dieciséis, por lo que a continuación se debe dilucidar si dichas afiliaciones fueron o no voluntarias, pues en este segundo caso, se actualizará la infracción denunciada y, en consecuencia, será procedente imponer una sanción entre las que establece el artículo 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIPE*.

En este sentido, la carga de la prueba para demostrar que las afiliaciones respectivas fueron el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de los hoy quejosos, corresponde al *PVEM*, y no a los quejosos acreditar que no dieron su consentimiento para ser afiliados a dicho partido, al tratarse de un hecho negativo que no es objeto de prueba. Lo anterior, visto que la defensa establecida por el partido político estriba en afirmar que sí cumplió las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación.

Así, al haberse demostrado la existencia de las afiliaciones de los quejosos al partido denunciado, el hecho a dilucidar se reduce a determinar si dichas afiliaciones fueron consentidas por los denunciados y por ende resultan legalmente válidas, o si por el contrario, tales afiliaciones adolecen de la manifestación de voluntad libre, individual, pacífica y personal de Lilia Velia Roca Contreras, Esmeralda Carmela Estrada Juárez, Ma. del Rosario Tirado Medina, Juan Eligio Alemán Cruz y Jonathan Díaz Hernández, y en consecuencia deben reputarse ilícitas.

Así las cosas, para sostener la legalidad de las afiliaciones cuestionadas, el *PVEM* ofreció como medios de prueba originales de las cédulas de afiliación de los hoy quejosos, medios de convicción que esta autoridad electoral, al valorarlos tanto en lo individual como en su conjunto con el caudal probatorio restante, estima

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/QLVRC/JD07/NL/122/2018

suficientes, idóneos y pertinentes para acreditar la licitud de las afiliaciones controvertidas.

No es obstáculo a lo anterior el hecho que se trata de documentales privadas que per se no tienen una eficacia demostrativa plena, pues apreciadas en su contexto y concatenadas con el caudal probatorio que obra en autos, de conformidad con los principios de la lógica y la sana crítica, así como las máximas de la experiencia, permiten a esta autoridad electoral concluir la licitud de la afiliaciones discutidas, ya que fueron el resultado de la manifestación libre y voluntaria de los hoy quejosos, las cuales, como ya se dijo, quedaron constatadas con las firmas autógrafas que los mismos imprimieron en dichos formatos.

En efecto, aun cuando las cédulas exhibidas no se tornan en prueba documental pública con valor probatorio pleno, lo cierto es que, cumplen con el procedimiento de afiliación descrito en el apartado del marco jurídico de la presente Resolución, el cual exige, como quedó dicho, la expresión de voluntad libre de los ciudadanos, en torno a su deseo de afiliarse al partido político mencionado.

De este modo, esta autoridad resolutora engarzó una cadena de indicios a partir de diversos hechos que en la especie se tuvieron como demostrados, en la especie: i) las manifestaciones de las partes y la *DEPPP* respecto a la existencia de las afiliaciones; ii) las documentales privadas de los formatos de afiliación de Lilia Velia Roca Contreras, Esmeralda Carmela Estrada Juárez, Ma. del Rosario Tirado Medina, Juan Eligio Alemán Cruz y Jonathan Díaz Hernández, en cuyos contenidos aparece la manifestación de la voluntad de los quejosos (firma autógrafa) y; iii) la falta de objeción eficaz de ese formato.

- **Lilia Velia Roca Contreras, Esmeralda Carmela Estrada Juárez, Ma. del Rosario Tirado Medina, y Jonathan Díaz Hernández, ciudadanos que no dieron respuesta a la vista formulada.**

En efecto, por cuanto hace a Lilia Velia Roca Contreras, Esmeralda Carmela Estrada Juárez, Ma. del Rosario Tirado Medina, y Jonathan Díaz Hernández, es posible advertir de las constancias de autos que, aun cuando tuvieron oportunidad procesal de objetar la autenticidad y contenido de las constancias de afiliación (cuando les fue corrido traslado con las constancias de afiliación exhibidas por el *PVEM* y al dárseles vista de alegatos) se abstuvieron de cuestionar los documentos referidos, pues no se apersonaron al procedimiento a formular manifestación alguna en ese sentido.

5.1 CONCLUSIÓN

A partir de los razonamientos establecidos en el apartado previo, esta autoridad considera que la afiliación de los ciudadanos antes referidos al *PVEM* fue apegada a derecho, ya que, de lo expuesto puede afirmarse que la conducta realizada por el justiciable resulta atípica en relación con los injustos descritos en la normatividad electoral que le fueron imputados.

Lo anterior es así, porque como fue antes razonado, la actualización del tipo administrativo en estudio tiene como elementos constitutivos: i) una incorporación al partido político que se traduce en el acto de afiliación formal y, ii) la falta de consentimiento libre del ciudadano para ser afiliado.

En este sentido para colmar la hipótesis normativa contenida en el artículo 3, párrafo 2 de la Ley de Partidos en relación con los diversos 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) del mismo ordenamiento legal y 443, párrafo 1, incisos a) y n) de la *LGIPE*, cuya infracción se imputó al denunciado, resultaba necesario que concurriera la acreditación de los dos elementos referidos, lo que no sucedió en el particular.

Es decir, en el caso debió demostrarse fehacientemente no solamente la afiliación de los quejosos al *PVEM*, sino también la ausencia de voluntad de los mismos para ser afiliados, en razón de que el núcleo del tipo administrativo en estudio lo constituye la libertad de asociación, de ahí que, si en la especie solamente se justificó la afiliación de los quejosos sin evidenciar la ausencia de voluntad de los mismos en ese acto, entonces, es inconcuso que no se colmó el tipo administrativo sujeto a escrutinio.

De igual manera, por las razones expuestas con antelación, tampoco se actualizó la hipótesis descrita en el numeral 29 de la *Ley de Partidos*, ya que al concluirse que los hoy quejoso se afiliaron libremente al partido justiciable, por mayoría de razón debe afirmarse que el *PVEM* no utilizó indebidamente la información y datos personales de los impetrantes, porque estos, en su oportunidad, consintieron afiliarse al partido político, para lo cual, conforme al marco normativo descrito en la presente Resolución, era menester proporcionar al *PVEM* esa información y documentos.

En suma, al no acreditarse uno de los extremos en que se finca el procedimiento sancionador, específicamente la falta de voluntad de afiliarse al partido denunciado, se concluye la inexistencia del tipo administrativo, por lo que no procede imponer al *PVEM* sanción alguna.

- **Juan Eligio Alemán Cruz, ciudadano que si dio respuesta a la vista formulada.**

En efecto, por cuanto hace a Juan Eligio Alemán Cruz, es posible advertir de las constancias de autos que, mediante Acuerdo de nueve de julio del año en curso, se le dio vista con la finalidad que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el medio de prueba presentado por el *PVEM*.

Tal requerimiento fue conforme a lo siguiente:

TERCERO. VISTA DE ALEGATOS.

...

*Asimismo, con el fin de respetar el derecho humano al debido proceso previsto en los artículos 14, 16 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se considera idóneo **dar vista** con las constancias atinentes (copia simple de la documentación aportada por el Partido Verde Ecologista de México –cédula de afiliación-) a Lilia Velia Roca Contreras, Esmeralda Carmela Estrada Juárez, Ma. Del Rosario Tirado Medina, **Juan Eligio Alemán Cruz** y Jonathan Díaz Hernández, para que, al momento de presentar su escrito de alegatos, efectúen las manifestaciones que consideren oportunas, las cuales deberán relacionarse con la materia del asunto que nos ocupa, a fin de contar con elementos suficientes sobre las presuntas afiliaciones indebidas que aducen.*

Al respecto, es importante hacer notar que las manifestaciones u objeciones que, en su caso, formule respecto de la información con la cual se le corre traslado, deberá sujetarse a las reglas establecidas en el artículo 24 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, el cual, para efectos ilustrativos se transcribe a continuación:

Artículo 24

De la objeción

- 1. Las partes podrán objetar las pruebas ofrecidas durante la sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores ordinario y especial, siempre y cuando se realice antes de la audiencia de desahogo.*
- 2. Para efectos de lo señalado en el párrafo que antecede, las partes podrán objetar la autenticidad de la prueba o bien su alcance y valor probatorio, debiendo indicar cuál es el aspecto que no se reconoce de la prueba o porque no puede ser valorado positivamente por la autoridad, esto es, el motivo por el que a su juicio no resulta idóneo para resolver un punto de hecho.*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/QLVRC/JD07/NL/122/2018

3. Para desvirtuar la existencia o verosimilitud de los medios probatorios ofrecidos, no basta la simple objeción formal de dichas pruebas, sino que es necesario señalar las razones concretas en que se apoya la objeción y aportar elementos idóneos para acreditarlas, mismos que tenderán a invalidar la fuerza probatoria de la prueba objetada.”

Queda a disposición de las partes el expediente citado al rubro para consulta, en el 08 Consejo Distrital de este Instituto en el Estado de Michoacán, así como en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, sita en Viaducto Tlalpan No. 100, edificio “C”, planta baja, Col. Arenal Tepepan, C.P. 14610, Delegación Tlalpan, en la Ciudad de México.

Al efecto, el denunciante en cita manifestó lo siguiente:

De conformidad con la copia simple de la presunta afiliación al Partido Verde Ecologista de México en la cual se aprecian mis generales principales tales como; nombre; completo; clave de elector; domicilio; escolaridad; y género. Además de una supuesta firma de mi persona, manifiesto a fin de establecer que dicho documento no fue llenado con mi consentimiento, toda vez que como se precia en mi identificación la firma de mi persona no coincide con la misma adjuntando copia simple de mi credencial para votar para efecto de cotejar la misma, asimismo, respecto a la escolaridad que se establece en el mismo, esta no tiene razón, toda vez que mi grado académico es de licenciado desde 1985. Sin otro particular solicito ante este órgano electoral se tomen medidas pertinentes (sic) para garantizar los derechos privados de las personas, sancionado al partido en cito, por la falsificación de documentos personales. Haciendo de su conocimiento lo anterior para los efectos legales conducentes.

Ahora bien, de las manifestaciones antes relatadas, se advierte la oposición por parte del quejoso al formato de afiliación, al referir que su firma fuera verificada de su credencial para votar con respecto a la supuesta afiliación de la que fue objeto, ya que la misma no era fidedigna.

Sin embargo, debe precisarse que tales argumentos se realizan de forma lisa y llana, es decir, no establece razones concretas en que, su caso, apoyen su oposición, ni tampoco aportó elementos de prueba para acreditar sus manifestaciones a efecto de restar fuerza probatoria de esa prueba, por lo que no cumplen con lo establecido en el artículo 24, párrafos 2 y 3, del *Reglamento de Quejas*.

En efecto, no basta para esta autoridad la simple objeción formal, sino que es necesario señalar las razones concretas en que se apoya la misma y aportar los elementos idóneos para acreditarlas. En ese sentido, si una de las partes se limita a objetar de manera genérica los medios de convicción ofrecidos por la contraparte, sin especificar las razones concretas para desvirtuar su valor, ni aporta elementos

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/QLVRC/JD07/NL/122/2018

para acreditar su dicho, su objeción no es susceptible de restar valor a las pruebas objeto del cuestionamiento.

Por tanto, si el quejoso se limita en referir que *dicho documento no fue llenado con mi consentimiento, toda vez que como se precia en mi identificación la firma de mi persona no coincide (...), asimismo, respecto a la escolaridad que se establece en el mismo, esta no tiene razón, toda vez que mi grado académico es de licenciado desde 1985*, adjuntando copia simple del título profesional a favor de Juan Eligio Alemán Cruz, sin embargo debió especificar las razones concretas en que apoyaba su argumento, así como aportar los elementos probatorios idóneos para tratar de acreditar su dicho; además debió especificar los motivos precisos que consideraba al caso, lo anterior, con la finalidad de desvirtuar el valor del documento aportado, sin embargo, esto no ocurrió, y en consecuencia su objeción no es susceptible de ser atendida por esta autoridad.

Consecuentemente, si el denunciante se circunscribió a oponerse de manera genérica al medio de convicción ofrecido por el PVEM, al referir que su firma fuera verificada de su credencial para votar con respecto a la supuesta afiliación de la que fue objeto, ya que la misma no era fidedigna, lo cierto es que no especificó las razones concretas para llegar a tal conclusión, ni mucho menos aportó elementos para acreditar su dicho, por lo que su objeción no es apta de restar valor a la prueba objeto del cuestionamiento.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 12/2012 (10a.) de rubro y contenido siguientes:⁵²

OBJECCIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE TERCEROS. LA NECESIDAD DE EXPRESAR EL O LOS MOTIVOS EN QUE SE SUSTENTA, DEPENDERÁ DE LA PRETENSIÓN DE QUIEN OBJETA (CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). *Tratándose de la objeción de documentos provenientes de terceros, el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no exige determinada formalidad para formular la oposición respectiva; sin embargo, se considera que, -atendiendo a la naturaleza de la prueba-, si lo que se pretende con la sola objeción de un documento privado proveniente de un tercero, es que no se produzca la presunción del reconocimiento tácito del documento por no haberlo objetado, bastará con que exprese su objeción de manera genérica a fin de que el juzgador tome en consideración este dato al momento de valorar la prueba, -ello con independencia del valor probatorio que se le otorgue, derivado del hecho de que se perfeccione o no la documental-. En cambio, si lo que se pretende con la objeción es controvertir, -entre otras causas-, la autenticidad de la firma o del contenido del*

⁵² Consultable en la liga electrónica

<http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2000608&Clase=DetalleTesisBL&Semana=0>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/QLVRC/JD07/NL/122/2018

documento, se estima que sí constituye un presupuesto necesario para tener por hecha la objeción, que se expresen las razones conducentes, dado que la objeción no es una cuestión de capricho, sino que se compone precisamente de los argumentos o motivos por los que el interesado se opone al documento respectivo. Dichas razones permiten que la parte oferente tenga la oportunidad de saber en qué sentido tiene que perfeccionar su documento, más aún cuando proviene de un tercero, ya que de lo contrario, el cumplimiento de esa carga procesal estará al arbitrio de quien simplemente objeta un documento sin exponer ninguna razón. Además, tal información también resulta importante para que el juzgador, teniendo esos elementos, le otorgue el valor y alcance probatorio en su justa dimensión.

En tal virtud, si bien el ciudadano Juan Eligio Alemán Cruz, objetó el documento base aportado por el denunciado, lo cierto es que no ofreció y mucho menos aportó a la controversia elemento de convicción alguno que soportara su dicho, de manera que debe concluirse que faltó a la carga de la prueba, al abstenerse de aportar pruebas que soportaran su dicho, de modo que la sola objeción del documento bajo análisis, basada en la afirmación no demostrada de su firma no era fidedigna, es insuficiente para derrotar la presunción de inocencia que surge de la documental en cuestión.

Ahora bien, con independencia de lo anterior, esta autoridad estima que con base en el marco normativo señalado las firmas en las cédulas de afiliación que proporcionen los partidos políticos, son un elemento indispensable para acreditar la voluntad de los ciudadanos para expresar su consentimiento para ser afiliados, más allá si los recuadros de las cédulas de afiliación no son llenados o son mal llenados, en el caso que nos ocupa, el correspondiente a la escolaridad, pues con la firma se ve reflejada la conformidad con el documento en el que se estampa, salvo que exista alguna prueba en contrario.

De tal manera, debe concluirse que dicho denunciante faltó a la carga de la prueba, absteniéndose de aportar pruebas que soportaran su dicho, aun cuando aporta copia simple de su título profesional con el objeto que se aprecia un error en el formato de afiliación, de modo que la sola objeción del documento bajo análisis, basada en la afirmación no demostrada de que su firma es distinta de la que calza en la constancia de afiliación, es insuficiente para derrotar la presunción de inocencia que surge de la documental en cuestión.

5.2 CONCLUSIÓN

A partir de los razonamientos establecidos en el apartado previo, esta autoridad considera no resultó fragmentada por las manifestaciones del referido quejoso, ya que la carga probatoria derivada de su afirmación no fue soportada en medio de prueba alguno.

Bajo esta óptica, resulta claro que si el quejoso sostuvo que dicho documento no fue llenado su consentimiento, toda vez que como se precia su identificación la firma no coincide con la misma, asimismo, indicó que respecto a la escolaridad que se establece en el mismo formato, esta no tiene razón, toda vez que su grado académico es de licenciatura, asumió una carga probatoria para demostrar ese aserto, no sólo por la carga genérica que asumen las partes de probar cualquier afirmación que realicen, sino porque la manipulación y/o falsificación de un hecho jurídico, lato sensu, (en el caso de la firma cuestionada) resulta un evento extraordinario que debe justificarse por quien lo afirma, ya que implica un estado de cosas anormal que genera una duda razonable sobre su realización, máxime, si se consideran las inferencias a las que arribó esta autoridad electoral a partir de la cadena de indicios y del material probatorio que obra en autos.

En consecuencia, si el quejoso no satisface esa carga al no ofrecer medio de prueba alguno, entonces, resulta dable tener por cierta las firmas cuestionadas y consecuentemente como lícita la afiliación del que el quejoso se duele.

En conclusión, a partir de los razonamientos establecidos en el apartado previo, esta autoridad considera que la afiliación de Juan Eligio Alemán Cruz, al *PVEM* fue apegada a derecho, ya que, de lo expuesto puede afirmarse que la conducta realizada por el justiciable resulta atípica en relación con los injustos descritos en la normatividad electoral que le fueron imputados.

En suma, ante lo razonado en líneas precedentes, se debe concluir que el bien jurídico tutelado por las normas constitucionales y legales que protegen la libertad del ciudadano para afiliarse voluntariamente a un partido político, no fue transgredido por el *PVEM* y, consecuentemente, el presente procedimiento sancionador debe considerarse **INFUNDADO**.

Similar consideración estableció el *Consejo General* del *INE*, en la determinación *INE/CG1213/2018*, dictada el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, al resolver

el procedimiento sancionador ordinario identificado con la clave UT/SCG/Q/RJHH/CG/70/2018.

TERCERO. DESAFILIACIÓN DE LOS QUEJOSOS.

En ese sentido, con independencia de que, en el fondo se ha declarado **infundado** el procedimiento, lo cierto es que resulta indudable que la intención de dichos denunciantes es **no** continuar como afiliados al partido político denunciado, por lo que se debe ordenar a *PVEM* para que, en el supuesto que los quejosos continúen en su padrón de afiliados, **sin mayor trámite**, cancele el registro de los mismos como sus militantes, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentaron sus escritos de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la *UTCE*, las pruebas que amparen el cumplimiento.

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017, de cinco de enero de dos mil diecisiete, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el *INE*, que lo vincule con un instituto político en particular.

CUARTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN.

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la Constitución Federal,^[1] se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previsto en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

^[1] Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: **“TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL”**, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: **“TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.”**

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara **infundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra de Partido Verde Ecologista de México, al no infringir las disposiciones electorales de libre afiliación respecto de los ciudadanos Lilia Velia Roca Contreras, Esmeralda Carmela Estrada Juárez, Ma. del Rosario Tirado Medina, Juan Eligio Alemán Cruz y Jonathan Díaz Hernández, en términos del Considerando SEGUNDO de esta Resolución.

SEGUNDO. Con independencia que en el fondo se ha declarado **infundado** el presente procedimiento, se ordena al **Partido Verde Ecologista de México** para que, de ser el caso que los quejosos - Lilia Velia Roca Contreras, Esmeralda Carmela Estrada Juárez, Ma. del Rosario Tirado Medina, Juan Eligio Alemán Cruz y Jonathan Díaz Hernández - continúen en su padrón de afiliados, **sin mayor trámite**, cancele sus registros como sus militantes, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución**, con efectos, a partir de la fecha en que presentaron sus escritos de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP* del *INE*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la *UTCE* las pruebas que amparen el cumplimiento, a fin de vigilar y corroborar el cumplimiento por parte del referido ente político, conforme a lo dispuesto en su Considerando TERCERO.

TERCERO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previsto en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Notifíquese a los ciudadanos **Lilia Velia Roca Contreras, Esmeralda Carmela Estrada Juárez, Ma. del Rosario Tirado Medina, Juan Eligio Alemán Cruz y Jonathan Díaz Hernández** y al **Partido Verde Ecologista de México**, por conducto de su respectivo representante ante este Consejo General; y por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Finalmente, en este conjunto de Proyectos de Resolución someto a su consideración el apartado 1.25 excluyendo de la votación en lo general, por lo que hace a la sanción, el criterio de sanción disminuida. _____

Señoras y señores Consejeros Electorales se consulta si se aprueba en lo general, el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 1.25. _____

Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo. _____

Aprobado por unanimidad en lo general (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello). _____

Ahora someto a su consideración en lo particular, por lo que hace a la sanción disminuida como viene el Proyecto de Resolución. _____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. _____

8 votos. _____

¿En contra? _____

3 votos. _____

Aprobado por 8 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y 3 votos en contra de los Consejeros Electorales Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez), Consejero Presidente. _____

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG1253/2018) Pto. 1.25 _____

INE/CG1253/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO
EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/LGT/JD22/MEX/207/2018
DENUNCIANTE: LILIANA GOLLAS TREJO
DENUNCIADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/LGT/JD22/MEX/207/2018 INTEGRADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LILIANA GOLLAS TREJO, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, CONSISTENTES EN SU PRESUNTA VIOLACIÓN AL DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN, EN SU MODALIDAD DE OMISIÓN DE CANCELAR EL REGISTRO DE MILITANCIA ATRIBUIBLE AL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Ciudad de México, 12 de septiembre de dos mil dieciocho.

GLOSARIO	
COFIPE	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DEPPP	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
DERFE	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral
INE	Instituto Nacional Electoral
LGIPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
LGPP	Ley General de Partidos Políticos
PAN	Partido Acción Nacional

GLOSARIO	
<i>Sala Superior</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>Tribunal Electoral</i>	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

A N T E C E D E N T E S

I. El presente procedimiento deriva de la queja presentada el doce de abril de dos mil dieciocho,¹ por Liliana Gollas Trejo por la presunta violación del *PAN* a su derecho de libre afiliación en su modalidad de omisión de cancelar su registro de militancia. La denuncia de mérito se registró, en un primer momento, como Cuaderno de Antecedentes con clave UT/SCG/CA/LGT/JD/22/MEX/39/2018.

II. Mediante acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho,² se ordenó requerir a distintos sujetos, entre ellos, al Vocal Ejecutivo de la 22 Junta Distrital Ejecutiva del *INE* en el Estado de México, para que informara si recibió el escrito de denuncia con firma autógrafa de la quejosa.

III. En razón de que el Vocal Ejecutivo referido en el numeral que antecede informó que el escrito de queja fue presentado en copia simple, mediante Acuerdo de doce de junio de dos mil dieciocho,³ se ordenó prevenir a la denunciante, a fin de que exhibiera escrito de queja en el que constara su firma autógrafa o huella digital.

IV. El catorce de junio de dos mil dieciocho, Liliana Gollas Trejo dio contestación a la prevención que le fue formulada.⁴

V. Por acuerdo de dieciocho de junio del presente año,⁵ se requirió a los sujetos que se indican a continuación, a efecto de que informara si la ciudadana quejosa se encontraba registrada dentro del Padrón de Afiliados del *PAN*.

¹ Visible a páginas 2-3 del expediente.

² Visible a páginas 19-25 del expediente.

³ Visible a páginas 35-38 del expediente.

⁴ Visible a página 40 y anexos 41-53 del expediente.

⁵ Visible a páginas 60-63 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LGT/JD22/MEX/207/2018

Sujeto	Oficio-notificación	Oficio-Fecha de respuesta
PAN	INE-UT/10073/2018 ⁶ 22 de junio de 2018	Sin respuesta
DEPPP	INE-UT/10074/2018 ⁷ 22 de junio de 2018	Correo electrónico de 26 de junio de 2018 ⁸

VI. Mediante acuerdo de cinco de julio de dos mil dieciocho,⁹ se ordenó el cierre del cuaderno de antecedentes antes referido, debiendo proceder a radicar la queja de mérito como un procedimiento sancionador ordinario.

R E S U L T A N D O

I. Registro, admisión y emplazamiento.¹⁰ El trece de julio de dos mil dieciocho, el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral instruyó el registro del procedimiento sancionador ordinario, al cual se le asignó la clave **UT/SCG/Q/LGT/JD22/MEX/207/2018**, por los hechos referidos anteriormente.

En el acuerdo en cita, se admitió a trámite el procedimiento de sanción y se ordenó el emplazamiento al *PAN*, para el efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la conducta que se le imputa y aportara los medios de prueba que considerara pertinentes.

Cabe señalar, que para lo anterior se le corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito.

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

⁶ Visible a página 70 del expediente.

⁷ Visible a página 67 del expediente.

⁸ Visible a páginas 72-73 del expediente.

⁹ Visible a páginas 74-76 del expediente.

¹⁰ Visible a páginas 89-95 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LGT/JD22/MEX/207/2018

Sujeto–Oficio	Notificación-Plazo	Oficio-Fecha de respuesta
PAN INE-UT/11723/2018 ¹¹	Citatorio: 18 de julio de 2018. ¹² Cédula: 19 de julio de 2018. ¹³ Plazo: 20 al 26 de julio de 2018.	RPAN-0632/2018 ¹⁴ 26 de julio de 2018

II. Alegatos.¹⁵ El treinta de julio de dos mil dieciocho se ordenó dar vista a las partes, a efecto de que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera. El acuerdo de vista para alegatos, se diligenció en los siguientes términos:

Denunciado

Sujeto–Oficio	Notificación-Plazo	Oficio-Fecha de respuesta
PAN INE-UT/12443/2018 ¹⁶	Citatorio: 06 de agosto de 2018. ¹⁷ Cédula: 07 de agosto de 2018. ¹⁸ Plazo: 08 al 14 de agosto de 2018.	RPAN-0806/2018 ¹⁹ 14 de agosto de 2018

Denunciante

Quejosa–Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
Liliana Gollas Trejo INE-JD22-MEX/207/2018 ²⁰	Cédula: 08 de agosto de 2018 ²¹ Plazo: 09 al 15 de agosto de 2018.	Sin respuesta

III. Glosa de documentación y elaboración de proyecto. A fin de contar con mayores elementos para la debida integración y resolución del presente asunto, se ordenó glosar diversa documentación que obra en los archivos de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, respecto al trámite de cancelación de registros de afiliados del PAN. Asimismo, toda vez que no había diligencias pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la Comisión de Quejas y Denuncias.

IV. Sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias. En la Octogésima Cuarta Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el seis de septiembre

¹¹ Visible a página 98 del expediente.

¹² Visible a páginas 99-104 del expediente.

¹³ Visible a páginas 105-106 del expediente.

¹⁴ Visible a páginas 110-112 del expediente.

¹⁵ Visible a páginas 113-116 del expediente.

¹⁶ Visible a página 119 del expediente.

¹⁷ Visible a páginas 120-124 del expediente.

¹⁸ Visible a páginas 125-126 del expediente.

¹⁹ Visible a páginas 134-135 del expediente.

²⁰ Visible a página 130 del expediente.

²¹ Visible a páginas 131-132 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LGT/JD22/MEX/207/2018

de dos mil dieciocho, la *Comisión* aprobó el presente proyecto, para su correspondiente discusión en el Consejo General, en lo general por unanimidad de votos de sus integrantes, y en lo particular, por mayoría de dos votos de la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela Herrera y del Consejero Electoral Benito Nacif Hernández, con el voto en contra de la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala Pérez, por cuanto a la individualización de la sanción, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión de Quejas y Denuncias, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte del *PAN*, en perjuicio de los ciudadanos que han sido señalados a lo largo de la presente determinación.

De conformidad con los artículos 442, párrafo 1, inciso a); 443 párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la *LGIPE* y 25 de la *LGPP*, respectivamente, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho Código, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38 del dispositivo legal en cita, las cuales son sancionables por el *Consejo General*.

En consecuencia, siendo atribución del *Consejo General* conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta competente para conocer y resolver respecto de las presuntas infracciones

denunciadas en el procedimiento sancionador ordinario, atribuidas al *PAN*, derivado, esencialmente, de la indebida afiliación al citado instituto político.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,²² en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con el derecho de libre afiliación en su modalidad de omisión de cancelar el registro de militancia:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de ciudadanos.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIPE*, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

SEGUNDO. ESTUDIO DE FONDO

1. LITIS

En el presente asunto se debe determinar si el **PAN** hizo caso omiso a la solicitud de cancelar el registro de militancia de Liliana Gollas Trejo, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción

²² Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*.

2. MARCO NORMATIVO

A) Constitución, tratados internacionales y ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

“Artículo 6

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: ...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

...

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.”

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la *Constitución*, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto

en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 de la *Constitución*— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 24/2002, emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES**.²³

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,²⁴ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la

²³ Consultable en la página del *Tribunal Electoral* o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

²⁴ Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes —asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

“Artículo 23. Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:

I...

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.”

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales publicada el treinta de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, inciso a) que era un requisito para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración

de principios, programa de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que, en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;
- Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
- Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGIPE*, que es obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su constitución y registro.

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.
- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LGT/JD22/MEX/207/2018

- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que, en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre

afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los documentos necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión

de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna del PAN

Como se ha mencionado anteriormente, la obligación de los partidos políticos de garantizar el derecho de libre afiliación de sus agremiados, deviene de las propias disposiciones constitucionales, legales y convencionales a que se ha hecho referencia párrafos arriba, por tanto, su cumplimiento, en modo alguno, se encuentra sujeto a las disposiciones internas que cada instituto tiene en su haber normativo.

No obstante, a efecto de tener claridad acerca del proceso que un ciudadano debe llevar a cabo para convertirse en militante del partido político ahora denunciado, se hace necesario analizar la norma interna del *PAN*, para lo cual, enseguida se transcribe la parte conducente de sus Estatutos, en los términos siguientes:²⁵

Estatuto del PAN

“Artículo 8

1. Son militantes del Partido Acción Nacional, los ciudadanos mexicanos que, de forma directa, personal, presencial, **individual, libre**, pacífica y voluntaria, **manifiesten su deseo de afiliarse**, asuman como propios los principios, fines, objetivos y documentos básicos del Partido Acción Nacional, y sean aceptados con tal carácter.

...

Artículo 9

1. El procedimiento de afiliación se regirá conforme a lo previsto en el Reglamento correspondiente. La solicitud **se presentará por escrito y podrá realizarse ante cualquier Comité del Partido de la entidad federativa correspondiente**, independientemente donde se encuentre su domicilio. Los mexicanos residentes en el extranjero, se podrán afiliar fuera del territorio nacional.

...

Artículo 10

1. Para ser militante, se requiere cumplir con los siguientes **requisitos**:

²⁵ Consultable en la página de internet del *PAN*, o bien en la dirección electrónica <http://actores-politicos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/nacionales/documentos-basicos/#!/pan>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LGT/JD22/MEX/207/2018

- a) Ser ciudadano mexicano;
- b) Tener un modo honesto de vivir;
- c) Haber participado en la capacitación coordinada o avalada por el área correspondiente del Comité Ejecutivo Nacional;

d) Suscribir el formato aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional, acompañando copia de su credencial para votar con fotografía vigente, emitida por el Instituto Nacional Electoral; en el caso de mexicanos que residan en el extranjero, podrán acompañar copia de la matrícula consular.

...

Artículo 12

1. Son obligaciones de los militantes del Partido:

...

g) Mantener sus datos actualizados en el Registro Nacional de Militantes, informando su cambio de domicilio, conforme a los datos registrados en el Instituto Nacional Electoral”

Reglamento de Militantes del Partido Acción Nacional²⁶

“**Artículo 1.** El presente ordenamiento es reglamentario de lo dispuesto en los artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 33 BIS numeral 1 fracciones I y II, 41, 49 y 128 numeral 2 de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, aprobados por la XVII Asamblea Nacional Extraordinaria.

Artículo 2. El presente Reglamento norma lo siguiente:

I. El procedimiento de afiliación, para el mantenimiento de la calidad de militante a fin de poder ejercer derechos; el procedimiento de actualización de datos; el procedimiento de aclaración y verificación de actividades; y el procedimiento de declaratoria de baja

...

Artículo 4. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:

...

XXI. REFRENDO. Manifestación de la voluntad del militante de continuar afiliado al Partido, mediante la realización de acciones o actividades electorales, comunitarias, políticas y de formación, registradas y verificables en la PLATAFORMA PAN, en los términos que señalen los Estatutos, Reglamentos y Acuerdos aplicables

...

²⁶ Consultable en la página de internet del PAN, o bien en la dirección electrónica: <http://actores-politicos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/nacionales/documentos-basicos/#!/pan>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LGT/JD22/MEX/207/2018

Artículo 8. Toda ciudadana o ciudadano mexicano que desee afiliarse como militante al Partido, deberá hacerlo de forma individual, libre, pacífica, voluntaria, directa, presencial y personal; asumir como propios los Principios de Doctrina, fines y objetivos; así como los Programas de Acción Política, Plataformas políticas y electorales, Estatutos y Reglamentos.

Artículo 9. La militancia en el Partido inicia a partir de la aceptación por el Registro Nacional de Militantes, el que verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos por los Estatutos. Una vez aceptado, la fecha de inicio de la militancia será a partir de que la instancia competente hubiere recibido la solicitud de afiliación.

...

Artículo 12. Toda ciudadana o ciudadano mexicano que desee afiliarse al Partido en los términos del Estatuto y el presente Reglamento, se sujetará al procedimiento siguiente:

I. Llenará el formato electrónico de inscripción en el portal del Registro Nacional de Militantes. La inscripción generará un folio que será utilizado por el militante para la inscripción en el Taller de Introducción al Partido;

II. Realizado el curso, reingresará al portal del Registro Nacional de Militantes para generar el formato de solicitud de afiliación, para lo cual deberá acudir de manera presencial y personal a cualquier Comité Directivo Municipal del Estado a que corresponda, o Comité Directivo Delegacional en el caso del Distrito Federal; o incluso a la respectiva sede del Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal;

III. El formato de solicitud de afiliación deberá acompañarse, al momento de la entrega, con fotocopias de los siguientes documentos, presentando los originales para cotejo:

a) Credencial para votar con fotografía vigente, expedida por la autoridad electoral nacional, para el efecto de acreditar la ciudadanía. Si dicha credencial no contiene el domicilio, el solicitante deberá anexar adicionalmente la copia de un comprobante de agua, luz, teléfono o gas, con una antigüedad no mayor a 4 meses, así como el original para cotejo; y

b) En su caso, copia de la renuncia a cualquier otro Partido Político en el que haya militado, presentada por lo menos seis meses antes de la fecha de solicitud de afiliación al Partido.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LGT/JD22/MEX/207/2018

IV. El Comité Directivo receptor, a través de su Director de Afiliación, imprimirá la solicitud de afiliación y adjuntará en la PLATAFORMA PAN, la fotografía del solicitante, con los parámetros establecidos por el Registro Nacional de Militantes;

V. El órgano del Partido receptor de los documentos descritos en la fracción III, registrará y digitalizará, en la PLATAFORMA PAN, los datos contenidos en la solicitud del ciudadano, en un término máximo de 15 días naturales.

Los Directores de afiliación acreditados ante el Padrón Nacional de Estructuras, estarán facultados para hacer entrega personal o por correo certificado o mensajería especializada a la instancia correspondiente, de las solicitudes de afiliación que reciban, en un término máximo de 15 días naturales a partir de dicha recepción.

En el caso de que las estructuras municipales correspondientes no cuenten con los medios tecnológicos para llevar a cabo el procedimiento de adjuntar la documentación en la PLATAFORMA PAN, con independencia del registro de los datos del solicitante, remitirán la documentación al Director de Afiliación del Comité Directivo Estatal, dentro de los 10 días naturales a partir de que reciban las solicitudes de afiliación para su trámite conducente. Pasado este periodo, el solicitante deberá acudir al Comité Directivo Municipal receptor a efecto de obtener el comprobante impreso de su solicitud de afiliación; y

VI. El Director de afiliación receptor: recibirá, sellará y asentará su firma en el lugar establecido de la solicitud de afiliación, en caso de que se cumpla con los requisitos establecidos en el presente artículo; en caso contrario, prevendrá al solicitante y registrará, en la PLATAFORMA PAN, sus datos, así como la fecha y el motivo de la prevención.

...

Artículo 37. Es obligación de los militantes del Partido comunicar al Comité Directivo Municipal o Delegacional, Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal que les corresponda, o en forma directa al Registro Nacional de Militantes, mediante los formatos autorizados, el trámite de cambio de domicilio o actualización de datos de la Credencial para Votar con Fotografía expedida por el Registro Nacional de Electores, presentando copia de la nueva credencial.

...

Artículo 72. Los militantes causarán baja del Padrón por los siguientes motivos:

...

VIII. Falta de refrendo.”

De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente:

- El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, fundamentalmente, en la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para decidir **libre e individualmente** si desean formar parte de los partidos y agrupaciones políticas.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LGT/JD22/MEX/207/2018

- Afiliado o militante es el ciudadano que libre, voluntaria e individualmente, acude a un partido político para solicitar su incorporación al padrón de militantes respectivo, a través de los documentos aprobados por los órganos partidistas correspondientes.
- Al *PAN* podrán afiliarse los ciudadanos que, libre e individualmente, expresen su voluntad de integrarse al partido.
- Para obtener la afiliación al partido de referencia, se requiere, además de ser ciudadano mexicano y expresar **su voluntad libre, individual y pacífica de afiliarse** al Partido, **suscribir personalmente** la solicitud de alta como militante.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán contemplar en sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos.
- Los militantes del *PAN* causarán baja del padrón de afiliados por falta de refrendo, entendiendo esto como la manifestación de la voluntad del militante de continuar afiliado al partido, mediante la realización de acciones o actividades electorales, comunitarias, políticas y de formación, registradas y verificables en la PLATAFORMA PAN, en los términos que señale el Estatuto, Reglamentos y Acuerdos aplicables.

D) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la *Constitución*, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

3. CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE LA VIOLACIÓN AL DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN DE UN PARTIDO POLÍTICO

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante del **PAN**, por regla general debe acudir a las instancias partidistas competentes, suscribir una solicitud de afiliación y tratándose de desafiliación a dicho instituto político se realiza, entre otros supuestos, por la falta de refrendo de su afiliación.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del *COFIPE*, precepto que, derivado de la reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la *LGPP*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y

voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que además los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y voluntaria.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la *Sala Superior*, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**,²⁷ donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia 21/2013, de rubro **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,²⁸ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria²⁹ y como estándar probatorio.³⁰

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

4. HECHOS ACREDITADOS Y PRECISIONES

Como se ha mencionado, la denuncia presentada por Liliana Gollas Trejo, versa sobre la supuesta violación a su derecho de libertad de afiliación, en su modalidad de su derecho de desafiliación por parte del *PAN*.

Ahora bien, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de la infracción denunciada, en el siguiente cuadro se resumirá, la información derivada de la

²⁷ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

²⁸ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.

²⁹ Tesis de Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

³⁰ Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. Véase la nota 35.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LGT/JD22/MEX/207/2018

investigación preliminar implementada, así como las conclusiones que fueron advertidas:

Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
Liliana Gollas Trejo	12 de abril de 2018 ³¹ Remite copia simple del escrito presentado ante el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, ³² copia simple del escrito dirigido al Secretario de afiliación ³³ y copia simple del escrito firmado por el Director de Afiliación dirigido a la quejosa, ³⁴	Correo electrónico de 26 de abril de 2018 ³⁵ Afiliada 09/04/1999	REP-PAN-INE-PVG-0632/2018³⁶ Baja del padrón: 15/11/2017
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente en el apartado denominado CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE VIOLACIÓN AL DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO, no existe controversia en el sentido de que la afectada fue militante del PAN.</p> <p>En el caso, se denunció una vulneración al derecho de libre afiliación en perjuicio de la denunciante, en su modalidad de no hacerle efectivo su derecho de desafiliación.</p> <p>La denunciante aduce que, en noviembre de 2017, no realizó el trámite de refrendo de su afiliación.</p> <p>La ciudadana aportó, entre otros documentos, copia simple de escrito de quince de marzo de dos mil dieciocho, signado por el Director de Afiliación del PAN, dirigido a la Liliana Gollas Trejo, a través del cual le informó que <i>...al no haber realizado el refrendo al Partido Acción Nacional en el periodo correspondiente, causa baja de forma automática, por lo cual se mantiene en un estatus como miembro dado de baja, a partir del mes de noviembre del año dos mil diecisiete.</i></p> <p>El PAN afirmó que la ciudadana estuvo afiliada a ese instituto político causando baja del padrón de militantes en fecha 15 de noviembre de 2017, en virtud de la aplicación del Programa Específico de revisión, verificación, actualización, depuración y registro de huellas digitales en el Estado de México... Dicho programa fue realizado a efecto de actualizar y depurar la información del padrón de militantes del Partido Acción Nacional. Asimismo, los ciudadanos militantes de este instituto político, debieron expresar por escrito, con firma autógrafa y proporcionando su huella dactilar, la voluntad de estar afiliado al PAN, así como desconocer y renunciar a la militancia que en su caso existiere en otro partido político diferente al PAN, sin que dicha situación ocurriera con las ciudadanas señaladas.</p> <p>Como se advierte, tanto la ciudadana como el PAN manifiestan que al no haber realizado la quejosa su refrendo de afiliación al instituto político denunciado en 2017, se procedió a su baja del padrón de militantes, tal y como lo establece el artículo 72, fracción VIII del Reglamento de Militantes de ese partido político.</p> <p>No obstante, de la información proporcionada el veintiséis de junio de dos mil dieciocho por la DEPPP, se desprende que la quejosa, por lo menos a esa fecha, aún continuaba como afiliada al partido político denunciado.</p>			

³¹ Visible a página 2 del expediente.

³² Visible a página 4 del expediente.

³³ Visible a página 5 del expediente.

³⁴ Visible a página 6 del expediente.

³⁵ Visible a páginas 72-73 del expediente.

³⁶ Visible a páginas 110-113 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LGT/JD22/MEX/207/2018

Ciudadano	Escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
<p>Es importante destacar que, si bien el <i>PAN</i> al dar contestación al emplazamiento, así como a la vista de alegatos, manifestó que la omisión de cancelar, de forma oportuna, el registro de militante de la quejosa, obedeció a problemas técnicos que fueron informados a la <i>DEPPP</i>, lo cierto es que no ofreció medios de prueba que acrediten su afirmación.</p> <p>Además, cabe resaltar que, de las investigaciones realizadas por la autoridad sustanciadora, particularmente de la atracción de constancias relacionadas con lo argumentado por el <i>PAN</i>, se advierte que en tal documentación, no se alude de forma alguna el impedimento técnico referido por el partido político denunciado.</p> <p>En consecuencia, la conclusión debe ser que SÍ se actualiza una violación al derecho a la libre afiliación en su vertiente de no permitir a una ciudadana ser desafiliada.</p>			

5. CASO CONCRETO

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por Liliana Gollas Trejo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; esto es, partido político, candidato o inclusive cualquier persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

Ahora bien, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, la autoridad debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

En principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento que formula en contra de la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde al quejoso.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 de la *LGIE*.

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así, como vimos, en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, está demostrado a partir de la información proporcionada por la DEPPP que la ciudadana denunciante se encontró, en ese momento, como afiliada del *PAN*.

Por otra parte, el *PAN* no demuestra con medios de prueba, que el hecho de mantener afiliada a la quejosa sea el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de la misma, en la cual, ella, *motu proprio*, expresó su consentimiento y, por ende, proporcionó sus datos personales a fin de continuar como afiliada a dicho instituto político.

Debiendo precisar que la carga de la prueba corresponde al *PAN*, en tanto que el dicho de la actora consiste en demostrar que dio su consentimiento para continuar afiliada a ese partido político, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba; por lo que, la defensa del partido político consiste básicamente en afirmar que, si cumplieron las normas que tutelan el derecho fundamental de mantener como afiliada a la quejosa.

Ahora bien, tal y como quedó de manifiesto en el apartado del *MARCO NORMATIVO* de la presente Resolución, así como en el correspondiente a *CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE VIOLACIÓN AL DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO*, la libertad de afiliación en materia político-electoral, es un derecho reconocido y así garantizado para todo ciudadano de nuestro país, al menos desde hace varias décadas, tanto a nivel constitucional como legal, el cual es concebido como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido político, permanecer afiliado a éste, desafiliarse e, incluso, no pertenecer a ninguno. Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección de datos personales e información relacionada con la vida privada de las personas, es igualmente un derecho con una trayectoria de protección por demás lejana.

En este sentido, es pertinente dejar en claro que la garantía y protección a los citados derechos, evidentemente no deriva de disposiciones reglamentarias al interior de los institutos políticos, que prevean como obligación del partido político, la conservación de los expedientes de afiliación de cada miembro, ni tampoco a partir de la emisión de los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, emitidos por el propio INE en la Resolución CG617/2012, sino que, como se vio, el derecho tutelado deviene de disposiciones de rango supremo, el cual debe ser tutelado en todo momento, y no a partir de normas internas o reglamentarias que así lo establezcan.

En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos políticos es un derecho de los ciudadanos previsto como garantía constitucional en nuestro país desde hace décadas, también lo es la obligación de los partidos políticos de preservar, y en su caso, de demostrar, en todo momento, que cualquier acto que engendre la voluntad de un ciudadano para formar parte en las filas de un

instituto político, esté amparado en el o los documentos que demuestren indefectiblemente el acto previo del consentimiento, siendo **ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no se tiene o tenía el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes.**

Lo anterior, porque, como se mencionó, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que, de manera insuperable, el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En este sentido, toda vez que la denunciante manifiesta no haber otorgado su consentimiento para continuar afiliada al partido político denunciado, que su afiliación se comprobó por la autoridad electoral competente, y que *el PAN*, no cumplió su carga probatoria para demostrar que el refrendo de la afiliación sí se solicitó voluntariamente; esta autoridad electoral considera que existe una vulneración al derecho de afiliación de la quejosa y que, intrínsecamente, para la configuración de esa falta utilizaron sin autorización sus datos personales, lo cual, debe ser considerado por esta autoridad para la imposición de la sanción que, en cada caso, amerite.

Por lo anterior, el presente procedimiento sancionador ordinario respecto a **Liliana Gollas Trejo** es **FUNDADO** en contra del *PAN*, por las razones y consideraciones siguientes:

De conformidad con lo asentado en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, está demostrado, a partir de la información proporcionada por la *DEPPP* que la hoy quejosa se encuentra afiliada al *PAN*, por lo menos al veintiséis de junio de dos mil dieciocho.

No obstante, **Liliana Gollas Trejo**, se inconformó por la negativa del *PAN* de desincorporarla de su padrón de militantes, aún y cuando no realizó el refrendo

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LGT/JD22/MEX/207/2018

correspondiente, en términos del Reglamento de Militantes de dicho instituto político, siendo esto una causal de baja de su padrón de afiliados.

Así, en términos de la información que obra en autos se advierte que:

1. No está a debate que, en algún momento, **Liliana Gollas Trejo se afilió libre y voluntariamente al PAN**, con base en sus propias manifestaciones.
2. **Liliana Gollas Trejo** manifestó que en noviembre de dos mil diecisiete, no realizó el trámite de refrendo de su afiliación.
3. La ciudadana aportó, entre otros documentos, copia simple de escrito de quince de marzo de dos mil dieciocho, signado por el Director de Afiliación del PAN, dirigido a la Liliana Gollas Trejo, a través del cual le informó que *...al no haber realizado el refrendo al Partido Acción Nacional en el periodo correspondiente, causa baja de forma automática, por lo cual se mantiene en un estatus como miembro dado de baja, a partir del mes de noviembre del año dos mil diecisiete.*
4. El PAN afirmó que la ciudadana estuvo afiliada a ese instituto político **causando baja del padrón de militantes en fecha 15 de noviembre de 2017**, en virtud de la aplicación del Programa Específico de revisión, verificación, actualización, depuración y registro de huellas digitales en el Estado de México... *Dicho programa fue realizado a efecto de actualizar y depurar la información del padrón de militantes del Partido Acción Nacional. Asimismo, los ciudadanos militantes de este instituto político, debieron expresar por escrito, con firma autógrafa y proporcionando su huella dactilar, la voluntad de estar afiliado al PAN, así como desconocer y renunciar a la militancia que en su caso existiere en otro partido político diferente al PAN, sin que dicha situación ocurriera con las ciudadanas señaladas.*
5. El PAN informó que el quince de noviembre de dos mil diecisiete, dio de baja el registro de la ciudadana como su militante.

6. Conforme a la información proporcionada por la *DEPPP*, **se advirtió que al veintiséis de junio de dos mil dieciocho, la quejosa apareció en el padrón de militantes del PAN con afiliación válida**, de conformidad con la información extraída del *Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos*, capturados por el propio partido político.
7. El *PAN* al dar contestación al emplazamiento, así como a la vista para formular alegatos, manifestó que la omisión de cancelar el registro de militante de la quejosa, obedeció a problemas técnicos que fueron informados a la *DEPPP*, sin embargo, no ofreció ni aportó medios de prueba que acrediten su afirmación.
8. De la documentación relacionada con la dificultad técnica aludida por el *PAN*, no se advierte que en las mismas se aluda de forma alguna lo argumentado por el partido político denunciado.

Con base en las anteriores conclusiones, esta autoridad considera que el partido incurrió en una violación al derecho de libertad de afiliación política, en su modalidad de **no permitir la desincorporación de esta ciudadana como su militante**, en perjuicio de la hoy quejosa, con motivo de la omisión o falta de cuidado en darla de baja de su padrón de afiliados, al tratarse de una causal de baja, en términos de lo previsto en su propia normatividad, específicamente lo establecido en el artículo 72, fracción VIII del Reglamento de Militantes del *PAN*.

En efecto, tal y como se ha referido en el apartado de marco normativo de la presente Resolución, todo ciudadano mexicano tiene derecho a asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III y 41, párrafo segundo Bases I, párrafo segundo *in fine*, y IV, de la *Constitución*, así como en el diverso 3, párrafo 2, de la *LGPP*.

Así, en ejercicio del derecho de asociación en materia político-electoral, los ciudadanos pueden formar partidos y agrupaciones políticas, cumpliendo para ello con los requisitos que establece la ley.

En este contexto, la libertad de asociación política constituye la base de la formación de los partidos, de manera que, en ejercicio de esa potestad, todo ciudadano, por igual, puede formar parte de ellos bajo la condición de cumplir con los requisitos que establece la norma, pudiendo también, en consonancia con esa libertad, tener la posibilidad de **desafiliarse** de éste en el momento que así lo desee.

Con base en ello, se considera que existirá violación a la libertad de afiliación, por parte de un partido político, cuando sin mediar justificación alguna, mantiene en contra de su voluntad a un ciudadano dentro de su padrón de afiliados, toda vez que dichas personas morales, en su calidad de entidades de interés público, en términos del numeral 41, Base I, de la *Constitución* tienen el deber irrestricto de garantizar el libre ejercicio de derechos fundamentales de todos los ciudadanos, entre ellos, los relativos a la libertad de afiliación política y, al no actuar de esta forma, evidentemente afecta su esfera jurídica, al relacionarlos con una fuerza política a la que ya no quieren pertenecer, siendo que su derecho a terminar el vínculo que los unía con el partido se vio afectado.

Como se mencionó, conforme a lo establecido en el artículo 72, fracción VIII del Reglamento de Militantes del *PAN*, los militantes causarán baja del padrón, entre otros motivos, por la falta de refrendo de su afiliación, entendiendo el refrendo como la manifestación de la voluntad del militante de continuar afiliado al Partido, mediante la realización de acciones o actividades electorales, comunitarias, políticas y de formación, registradas y verificables en la plataforma *PAN*, en los términos que señalen los Estatutos, Reglamentos y Acuerdos aplicable, **circunstancia que, en el caso en estudio, no se actualizó al no haber realizado Liliana Gollas Trejo los actos tendentes a su refrendo de afiliación al instituto político denunciado.**

Es importante señalar que el *PAN* argumentó que el registro de afiliación de la ciudadana fue cancelado el quince de noviembre de dos mil diecisiete, en razón de que al no haber realizado la quejosa su refrendo de afiliación al instituto político denunciado en dos mil diecisiete, se procedió a su baja del padrón de militantes, tal y como lo establece el artículo 72, fracción VIII del Reglamento de Militantes de ese partido político.

Es decir, el *PAN* reconoce que se actualizó una causal de baja de militancia de la ciudadana al no haber refrendado su afiliación, esto es, existe una confesional por parte de dicho instituto político que cobra relevancia al caso, porque corrobora de una manera indirecta que el registro de la quejosa debió ser dado de baja como afiliada del partido político denunciado.

Así, se considera que el presente procedimiento debe declararse **FUNDADO**, lo anterior, porque el partido político denunciado no manifestó ni mucho menos acreditó la causa, motivo o razón por la cual mantiene a **Liliana Gollas Trejo** dentro de un padrón de afiliados, que, como se refirió, en términos de su normativa interna la falta de refrendo de afiliación es causa de baja de dicho padrón de militantes.

Lo anterior es así, toda vez que, como ya se anunció, al tratarse de un ente de interés público, está obligado, entre otras cosas, a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; al tenor de lo dispuesto en el inciso a) del párrafo 1, del artículo 25 de la *LGPP*.

En este sentido y de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales que le son aplicables, el *PAN*, debió garantizar el ejercicio fundamental de libre afiliación política, en todas sus vertientes, incluida por supuesto el de desafiliación de sus agremiados, razón por la cual no puede constituir una justificación el que se argumente que no se hayan cumplido con el proceso interno de dicho instituto político, siendo que ni siquiera, acreditó que la ciudadana de referencia estuvo en condiciones de imponerse ante el mismo, en los términos ya apuntados.

La anterior conclusión tiene sustento en la Tesis de Jurisprudencia **29/2002**,³⁷ cuyo rubro y texto es al tenor literal siguiente:

**“DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU
INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA.**
Interpretar en forma restrictiva los derechos subjetivos públicos fundamentales de

³⁷ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=29/2002&tpoBusqueda=S&sWord=29/2002>

asociación en materia política y de afiliación política electoral consagrados constitucionalmente, implicaría desconocer los valores tutelados por las normas constitucionales que los consagran, así cabe hacer una interpretación con un criterio extensivo, toda vez que no se trata de una excepción o de un privilegio, sino de derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados, no restringidos ni mucho menos suprimidos. En efecto, los derechos fundamentales de carácter político-electoral consagrados constitucionalmente, como los derechos de votar, ser votado, de asociación y de afiliación, con todas las facultades inherentes a tales derechos, tienen como principal fundamento promover la democracia representativa, habida cuenta que, conforme con lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa y democrática. Lo anterior, en virtud de que las reglas interpretativas que rigen la determinación del sentido y alcances jurídicos de una norma no permiten que se restrinja o haga nugatorio el ejercicio de un derecho fundamental, como lo son los de asociación política y de afiliación político-electoral; por el contrario, toda interpretación y la correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus alcances jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que aquélla esté relacionada con un derecho fundamental. Lo anterior, desde luego, no significa en forma alguna sostener que los derechos fundamentales de carácter político sean derechos absolutos o ilimitados.”

Por tanto, se concluye que el derecho fundamental de desafiliación, en el caso, por falta de refrendo de afiliación de la denunciante, debió ser garantizado por el *PAN*, habida cuenta que su goce y ejercicio no es una prerrogativa cuya disponibilidad quede a cargo del partido político denunciado, sino exclusivamente de los ciudadanos.

Sirve de apoyo a los anteriores argumentos, lo establecido en la Tesis de Jurisprudencia **24/2002**,³⁸ del *Tribunal Electoral*, de rubro y texto siguientes:

“DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES.- El derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 5o., párrafos 1 y 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos

³⁸ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas, y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios y, por tanto, con mayor especificidad que el derecho de asociación y está garantizado jurisdiccionalmente mediante el sistema de medios de impugnación en materia electoral previsto en el artículo 41, fracción IV, primer párrafo, in fine, en relación con lo dispuesto en el artículo 99, fracción V, de la Constitución federal. Además, el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también la prerrogativa de pertenecer a éstos con todos los derechos inherentes a tal pertenencia; en particular, el derecho fundamental de afiliación político-electoral consagrado constitucionalmente faculta a su titular para afiliarse o no libremente a un determinado partido político, conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafilarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.”

A fin de dar mayor claridad a la presente Resolución, enseguida se esquematiza el tiempo transcurrido entre la fecha en que la hoy denunciante no realizó el refrendo de afiliación correspondiente, y en el momento que se presentó la queja que dio origen al presente asunto.

Quejosa	Queja	Fecha en que se debió refrendar la afiliación	Tiempo transcurrido entre la falta de refrendo de afiliación y la presentación de la queja
Liliana Gollas Trejo	12 de abril de 2018 ³⁹	Noviembre de 2017	5 meses aproximadamente

Finalmente, es importante destacar que, si bien el *PAN* en las etapas procesales de contestación al emplazamiento y vista para formular alegatos, manifestó que la omisión de cancelar de su padrón de afiliados, de forma oportuna, el registro de militante de la quejosa, obedeció a problemas técnicos que fueron informados a la *DEPPP*, lo cierto es que el partido político denunciado no ofreció ni aportó medios

³⁹ Visible a páginas 2-3 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LGT/JD22/MEX/207/2018

de prueba que acrediten su afirmación, ya que solo se limitó a referir la clave del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/5172/2018 con el que la Dirección en cita le dio respuesta.

No obstante, lo anterior, la autoridad sustanciadora a fin de agotar el principio de exhaustividad que rige los procedimientos administrativos sancionadores, determinó atraer constancias que obran en los archivos de este Instituto, particularmente copia del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/5172/2018 y sus anexos, referidos por el *PAN*.

El documento en cita es de fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho, y se asentó, en lo que interesa que, el representante del *PAN* ante el *Consejo General* hizo del conocimiento de la *DEPPP* problemas técnicos para poder realizar en el Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos las cancelaciones de sus afiliados. Para lo cual, *los días 12 y 14 de junio del año en curso, personas de la Dirección de Partidos Políticos y Financiamiento dio atención vía telefónica a dicho partido político respecto al procedimiento a seguir para llevar a cabo las cancelaciones de registro de afiliados.*

Al respecto, se debe destacar que, si bien se hace mención a problemas técnicos para la cancelación de registros por parte del *PAN*, lo cierto es que no se precisa en qué consistieron, ni tampoco si ello impedía realizar la desafiliación de los ciudadanos al instituto político denunciado, entre ellos la quejosa Liliana Gollas Trejo.

Además, de la simple lectura al contenido de los oficios RPAN-0261/2018 y RPAN2-0371/2018, signados por el representante del *PAN* ante el *Consejo General*, no se advierte mención a tal circunstancia, tal y como se evidencia a continuación:

Oficio RPAN-0261/2018

“En atención al oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/4233/2018 y en cumplimiento al Resolutivo CUARTO, se informa que los ciudadanos señalados en el Resolutivo SEGUNDO no se encuentran en el padrón de afiliados de este Instituto Político, de conformidad con lo ordenado, así como de lo informado en su momento a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, tal y como se puede verificar en la dirección electrónica

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LGT/JD22/MEX/207/2018

<http://www.rnm.mx/Estrados> que contiene el Padrón de Militantes del Partido Acción Nacional debidamente actualizado”.

Oficio RPAN-0371/2018

“En alcance a mi similar RPAN-0261/2018 mediante el cual se atendió el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/4233/2018 y en cumplimiento al Resolutivo CUARTO del Acuerdo INE/CG119/2018 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, hago del su conocimiento que al ingresar al Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos con la finalidad de realizar la consulta (mediante clave de elector para evitar homonimias) si dichos ciudadanos aparecen como militantes del Partido Acción Nacional y en su caso cancelar los registros como militantes, nos arroja el mensaje de **“No se han encontrado afiliados”**, tal y como se aprecia en las impresiones de pantalla que se anexan como ejemplo, asimismo, se puntualiza que dicho mensaje también lo arroja en la consulta que se haga con los datos de algún otro militante, como se observa en los ejemplos que se anexan.

...

Derivado de lo anterior, solicito su apoyo a efecto de que se informe el procedimiento a seguir por parte de este Instituto político a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo INE/CG119/2018 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral”.

Finalmente, es importante destacar que la emisión del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/5172/2018, obedeció, esencialmente, al recordatorio de la *DEPPP* al *PAN*, para que diera cumplimiento a diversa resolución dictada por este *Consejo General*, en el sentido de proceder a cancelar los registros de ciudadanos afiliados indebidamente, cuya temporalidad de tales actos es conforme a lo siguiente:

Expediente	Fecha de resolución	Resolutivo CUARTO
UT/SCG/Q/ERS/CG/33/2017 INE/CG119/2018	28-Febrero-2018	CUARTO. Se ordena al PAN que, según corresponda y dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución, inicie el trámite o procedimiento interno respectivo a fin de cancelar el registro de los quejosos como sus militantes, y hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la DEPPP, para que, en el ámbito de sus atribuciones, proceda a eliminar del registro de afiliados respectivo a los ciudadanos en cuestión.

Actos para el cumplimiento del resolutivo CUARTO:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LGT/JD22/MEX/207/2018

Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/4233/2018	Oficio RPAN-0261/2018	Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/4597/2018	Oficio RPAN2-0371/2018	Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/5172/2018
16-Mayo-2018	18-Mayo-2018	01-Junio-2018	13-Junio-2018	19-Junio-2018
Recordatorio de la <i>DEPPP</i> para el cumplimiento de la resolución INE/CG119/2018	Respuesta en el sentido de que se canceló el registro de los ciudadanos .	Precisión de que el registro de militancia de los ciudadanos es vigente en el Sistema.	Respuesta en el sentido de que se canceló el registro de los ciudadanos, requiere apoyo adicional.	Se le informó sobre el status de desafiliación de los ciudadanos, así como de los actos llevados a cabo para tal evento.

Esto es, el supuesto problema técnico que alega el *PAN* aconteció, según su dicho, aproximadamente en el mes de mayo de dos mil dieciocho, siendo que, con antelación a ello no argumenta ni acredita que tal falla técnica hubiera acontecido, específicamente para llevar a cabo en noviembre de dos mil diecisiete la cancelación del registro de la quejosa Liliana Gollas Trejo.

Por lo anterior, este órgano colegiado considera pertinente declarar **fundado** el presente procedimiento, por lo que hace al presente apartado, pues se concluye que el *PAN* infringió las disposiciones electorales al no desafiliar a **Liliana Gollas Trejo**, con motivo de la actualización de una causal de baja de su padrón de afiliados en términos de su propio Reglamento de Militantes, violentando así su derecho de afiliación política, en su modalidad de no hacer efectiva su desafiliación, aunado a que para tal fin, utilizó sus datos personales de forma indebida.

Con base en lo expuesto, con independencia de las razones expuestas en los párrafos que preceden, esta autoridad debe privilegiar y garantizar el derecho de libertad de desafiliación en favor de la denunciante que constituye este apartado, debiendo sancionar al partido por la conducta que se declaró fundada, a efecto de evitar en casos futuros la repetición de conductas con la que nos ocupa.

En consecuencia, al determinarse que el *PAN* infringió la norma electoral ya señalada, se declara **fundado** el presente procedimiento, por cuanto hace a la omisión de desafiliar a **Liliana Gollas Trejo**, con motivo de la actualización de la causal de baja de su padrón de afiliados, en términos de lo previsto en la fracción

VIII del artículo 72 del Reglamento de Militantes del *PAN*, así como por el uso indebido de sus datos personales.

Por tanto, es de concluirse que, respecto a **Liliana Gollas Trejo**, el *PAN* **Sí violó el derecho de libre afiliación de la quejosa, en la modalidad de su derecho de desafiliación.**

TERCERO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de las falta denunciada, así como la responsabilidad por parte del **PAN**, en el caso detallado en el considerando que antecede, procede ahora determinar la sanción correspondiente, en atención a lo dispuesto en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, relativo a la gravedad de la responsabilidad en que se incurra; el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; y, en su caso, la reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.

En relación con ello, el *Tribunal Electoral* ha sostenido que para individualizar la sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción electoral.

1. Calificación de la falta

A. Tipo de infracción

Partido	Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
PAN	La infracción se cometió por una acción del partido político denunciado, que transgrede disposiciones de la <i>Constitución</i> , del	La conducta fue la violación al derecho de libre afiliación de Liliana Gollas	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; 443, párrafo 1, inciso a), de la <i>LGIPE</i> ; 2, párrafo 1, inciso b) y 25,

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LGT/JD22/MEX/207/2018

Partido	Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
	COFIPE, en el momento de su comisión, así como de la <i>LGIFE</i> y la <i>LGPP</i> .	Trejo por parte del PAN	párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la <i>LGPP</i> .

B. Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o prohibidas.

En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el caso concreto, se acreditó que el **PAN** violó el derecho de libre afiliación de **Liliana Gollas Trejo** en la modalidad de su derecho de desafiliación, violentando con ello la norma electoral, en específico las disposiciones precisadas en el recuadro inserto en el subapartado previo.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de los ciudadanos mexicanos, de optar libremente por ser o no militante de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, efectivamente consintieron libremente en ser sus agremiados.

Por otra parte, como se analizó, para mantener el registro de afiliación acreditado en el expediente que se resuelve se usaron los datos personales de la promovente sin que ésta hubiese otorgado su consentimiento para ello, lo cual, constituye un

elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida.

En efecto, si bien es cierto, a partir de las constancias que obran en autos no está demostrado que los datos personales hubieran sido utilizados con un propósito diverso a la afiliación indebida en sí misma, o bien su difusión frente a terceros, lo es también que dicha información fue necesaria para materializar la incorporación de los datos de la actora al padrón de militantes del partido político denunciado.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo argumentado en la sentencia de siete de junio de dos mil dieciocho dictada por la Sala Superior al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-141/2018,⁴⁰ en la que se estableció, en lo que interesa sobre el tema, lo siguiente:

“...los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de un ciudadano pertenecer a un partido político, no puede alegar que existe uso indebido de sus datos personales porque se consideran públicos.

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban pertenecer.”

De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción correspondiente al **PAN**.

C. Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que el **PAN** transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la normativa interna del instituto partido político, y que, tal infracción se cometió en detrimento de los derechos de una ciudadana, esta situación no conlleva estar en presencia de

⁴⁰ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0141-2018.pdf

una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de afiliación en su modalidad de desafiliación al *PAN*, quien mantuvo a **Liliana Gollas Trejo** en su padrón de militantes, sin demostrar el consentimiento previo para ello.

D. Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

- a) Modo.** En el caso bajo estudio, la irregularidad atribuible al **PAN**, consistió en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la *Constitución*; 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*, al violar el derecho de libre afiliación de **Liliana Gollas Trejo** en la modalidad de su derecho de desafiliación.
- b) Tiempo.** En el caso concreto, **Liliana Gollas Trejo** no realizó el refrendo de afiliación correspondiente al *PAN* en noviembre de dos mil diecisiete, lo cual actualiza una causal de baja del padrón de militantes del instituto político denunciado; ante ello, el partido político debió realizar los trámites correspondientes a efecto de eliminarla de su padrón de militantes.
- c) Lugar.** Con base en las razones plasmadas en el escrito de denuncia, se deduce que la falta atribuida al **PAN** se cometió en el Estado de México.

E. Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Se considera que en el caso existe una conducta **dolosa** por parte del *PAN*, en violación a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la *Constitución*; 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*.

La falta se califica como **dolosa**, por lo siguiente:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LGT/JD22/MEX/207/2018

- El *PAN* es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus constitucional de **entidad de interés público**, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la *Constitución*; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- El *PAN* está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la *LGPP*.
- El de libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.
- Todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LGT/JD22/MEX/207/2018

- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1 y 25, párrafo 1, inciso a), de la *LGPP*.
- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria.**
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político o, en su caso, la omisión de desafiliación, es una violación de orden constitucional y legal que **requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento.**

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta se considera dolosa, porque:

- 1) La quejosa manifiesta que desde noviembre de dos mil diecisiete su estatus es como miembro dado de baja del padrón del *PAN*, ya que no realizó el referendo correspondiente ante el partido político denunciado.
- 2) Quedó acreditado que, por lo menos al veinticinco de junio de dos mil dieciocho, la quejosa aparece en el padrón de militantes del *PAN*.
- 3) El partido denunciado no demostró ni probó que la omisión de desafiliación de la quejosa fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun indiciaria, para estimar que el hecho de mantener registrada a la quejosa en su padrón de afiliación fue debida y apegada a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.
- 4) El *PAN* manifestó que no pudo llevar a cabo, de forma oportuna, la desafiliación de la quejosa por cuestiones técnicas, sin embargo, estas supuestas fallas que aduce corresponden a los meses de mayo y junio de dos mil dieciocho, siendo que la cancelación de registro de la ciudadana debió acontecer en noviembre de dos mil diecisiete o, por lo menos, en una temporalidad cercana a esta fecha. Además de que no aportó medio de prueba para acreditar su afirmación sobre la falta técnica que señala.

F. Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el **PAN**, se cometió al violar el derecho de libre afiliación de Liliana Gollas Trejo, en su vertiente de derecho de desafiliación del padrón de militantes del referido instituto político.

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en garantizar el derecho de libre afiliación y desafiliación, así como la protección de los datos personales de los ciudadanos mexicanos, mediante la conservación de los

documentos atinentes que permitan demostrar el acto de voluntad de la hoy quejosa de militar o no en los distintos partidos políticos.

2. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A. Reincidencia

Por cuanto a la **reincidencia** en que pudiera haber incurrido el *PAN* en esta resolución, este organismo electoral autónomo considera que **no se actualiza**.

De conformidad con lo establecido en el artículo 458, párrafo 6 de la *LGIPE*, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, la Sala Superior ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);
2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
3. Que en ejercicios anteriores el infractor **haya sido sancionado por esa infracción mediante Resolución o sentencia firme**.

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el *Tribunal Electoral*, a través de la Tesis de Jurisprudencia **41/2010**, de rubro **REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN**.⁴¹

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con anterioridad.

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta.

En este sentido, debe precisarse que, en el presente asunto, no puede considerarse actualizado dicho supuesto por cuanto hace al **PAN**, pues en los archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya sancionado a ese instituto político por faltas como la que se sanciona por esta vía, que se hayan dictado con anterioridad a los hechos materia de las presentes denuncias.

B. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que

⁴¹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010>

concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de Liliana Gollas Trejo en la modalidad de su derecho de desafiliación, pues se comprobó que la quejosa sigue afiliada al *PAN*.
- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, de optar por ser o no militante de algún partido político, y la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.
- No existió un beneficio por parte del partido denunciado, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral.
- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso Electoral.
- No existe reincidencia por parte del *PAN*.

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente **calificar la falta** en que incurrió el *PAN* como de **gravedad**

ordinaria, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el partido denunciado dolosamente infringió el derecho de libre afiliación de la quejosa, lo que constituye una violación al derecho fundamental de la ciudadana reconocido en la *Constitución*.

Al respecto, es importante precisar que para efectos de determinar el monto de la sanción a imponer se debe diferenciar si se está ante una indebida afiliación, o **como en el caso acontece**, una violación al derecho de libre afiliación en su vertiente de no permitirle a la quejosa ser desafiliada.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo resuelto por la Sala Superior al dictar sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-141/2018, en la que determinó, esencialmente, lo siguiente:

“Finalmente, para efectos de la sanción a imponer, consideró oportuno diferenciar entre aquellos ciudadanos de los que se utilizaron indebidamente sus datos personales para afiliarlos sin su consentimiento al partido denunciado (once ciudadanos) y aquélla que denunció la presunta indebida afiliación en su vertiente de falta de atención al derecho de desafiliación, puesto que, si bien en ambos casos estamos ante la presencia de una falta grave ordinaria, lo cierto es que en el primero de los supuestos hubieron hechos afirmativos tendentes a menoscabar el derecho de libre afiliación, utilizando datos personales de los afectados y en el segundo, se trata de una omisión, lo cual conlleva que la sanción imponer en cada supuesto sea diferenciada.

Por tal motivo, en el caso concreto, se estima que la motivación expuesta por el Instituto Nacional Electoral fue suficiente para justificar la individualización de la sanción.”

C. Sanción a imponer

Ahora bien, la mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondiente, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción.

Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y

lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor entidad.⁴²

El artículo 456, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE, dispone el catálogo de sanciones a imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México; reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita; y en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la *Constitución* y de la *LGIPE*, con la cancelación de su registro como partido político.

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción (especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción acreditada), así como la conducta realizada por el **PAN** se determina que debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida.

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la LGIPE, confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que, a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realicen una falta similar.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

⁴² Véase la Tesis **XXVIII/2003**, del *Tribunal Electoral*, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LGT/JD22/MEX/207/2018

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que ni el COFIPE ni la LGIPE, determinan pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo establecen las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

Asimismo, es importante tomar en cuenta el número de ciudadanos afiliados indebidamente al **PAN**, es decir, los **diecisiete ciudadanos**.

Con base en lo anterior, este Consejo General estima que, derivado de las circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida al **PAN**, justifican la imposición de la sanción prevista en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la LGIPE, consistente en una **MULTA unitaria por cuanto hace a Liliana Gollas Trejo sobre quien se cometió la falta acreditada**, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto.

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LGT/JD22/MEX/207/2018

reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la sanción a imponer.

En este orden de ideas, es pertinente hacer notar, que ha sido criterio de esta autoridad, en la resolución INE/CG120/2018, de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/ALC/CG/39/2017, así como en la resolución INE/CG448/2018, de once de mayo de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2017, las cuales fueron confirmadas por el *Tribunal Electoral* al dictar sentencia el veinticinco de abril y once de mayo de dos mil dieciocho, en los medios de impugnación con clave SUP-RAP-047/2018⁴³ y SUP-RAP-137/2018,⁴⁴ respectivamente, en los que se sancionó por una indebida afiliación de un ciudadano, en cada caso, con una multa equivalente a 642 (seiscientos cuarenta y dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento de la comisión de la conducta, sanción que se estima debe tomarse como base para el presente asunto, si se considera que en dichos asuntos se demostró la comisión de una infracción similar a la que acontece en los casos que aquí se resuelven.

En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta causa, es claro que la individualización de la sanción aplicada con motivo de la violación al derecho de afiliación de Liliana Gollas Trejo en la modalidad de no permitirle ser desafiliada al *PAN*, no debe perder de vista las condiciones socioeconómicas del instituto político, y no simplemente, los hechos denunciados y acreditados en el presente procedimiento, a fin de que la sanción que se imponga resulte efectivamente proporcional sin ser excesiva.

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad debe determinar su monto o cuantía, **tomando en cuenta** las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad

⁴³ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0047-2018.pdf

⁴⁴ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0137-2018.pdf

arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que corresponda.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión que tiene sustento en la Tesis relevante **XXVIII/2003**,⁴⁵ emitida por el *Tribunal Electoral*, misma que a letra establece:

“SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.- En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.”

Ahora bien, a juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con base en lo dispuesto en la fracción II del numeral citado, lo procedente es imponer

⁴⁵ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003>

la multa equivalente a **321 (trescientos veintiún) días de Unidad de Medida y Actualización al PAN, por la ciudadana que no fue desafiliada.**

Lo anterior, conforme al criterio de este *Consejo General* establecido en la Resolución INE/CG536/2018,⁴⁶ de veinte de junio de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/GPM/JL/OAX/28/2018, derivado de una falta de la misma naturaleza a la que aquí se estudia, esto es por violación al derecho a la libre afiliación en su vertiente de no permitir a los ciudadanos ser desafiliados.

Es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la *Constitución* —efectuada por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 10/2018,⁴⁷ del *Tribunal Electoral*, de rubro y contenido siguiente:

“MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.- De la interpretación sistemática de los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transitorios segundo y tercero del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como 44, párrafo primero, inciso aa), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando en consideración el principio de legalidad que rige en los procedimientos sancionadores, se advierte que el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del ilícito.”

⁴⁶ Consultable en la página de internet del INE o bien en la dirección electrónica: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96450/CGor201806-20-rp-16-10.pdf>

⁴⁷ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=Jurisprudencia,10/2018>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LGT/JD22/MEX/207/2018

Sentando lo anterior, se procede a realizar el cálculo de la sanción que corresponde al *PAN*, con base en lo expuesto a continuación:

PAN		
Total de quejosos	Unidad de Medida y Actualización 2017	Sanción a imponer
1	\$75.49	\$24,232.29

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, pues sin ser gravosa, sí puede inhibir al *PAN*, para que en el futuro vigile el cumplimiento de las normas de la materia.

D. El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la infracción

Se estima que la infracción cometida por parte del *PAN*, aun cuando causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de la infracción.

E. Las condiciones socioeconómicas del infractor

Sobre este punto, es preciso señalar que conforme al Acuerdo INE/CG339/2017, emitido por este *Consejo General* el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se estableció que, entre otros, el *PAN* recibiría mensualmente en el presente ejercicio, por concepto de financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes, la siguiente cantidad:

SUJETO	Monto del financiamiento público para el sostenimiento de Actividades Ordinarias del mes de septiembre 2018
PAN	\$68,993.261.00

Ahora bien, según fue informado por la *DEPPP*, a través del oficio **INE/DEPPP/DE/DPPF/5693/2018**, el monto de la ministración mensual correspondiente a septiembre de dos mil dieciocho, debía ser ajustado en función

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LGT/JD22/MEX/207/2018

de las sanciones administrativas pendientes de cubrir por dicho instituto político nacional, por lo cual la cifra total a recibir sería la siguiente:

SUJETO	IMPORTE DE LA MINISTRACIÓN DE SEPTIEMBRE DE 2018	IMPORTE TOTAL DE LAS SANCIONES SEPTIEMBRE 2018	IMPORTE DE REINTEGRO DE FINANCIAMIENTO LOCAL PARA GASTOS DE CAMPAÑA	IMPORTE NETO DE LA MINISTRACIÓN
PAN	\$68,993,261.00	\$180,672.00	\$0.00	\$68,812,589.00

F. Impacto en las actividades del sujeto infractor

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta al **PAN**, no es de carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida, respecto al monto del financiamiento que recibirá por concepto de actividades ordinarias permanentes en el mes de septiembre del año en curso, el siguiente porcentaje:

Partido político	Año	Monto de la sanción por ciudadano. ⁴⁸	Ciudadanos no desafiliados	% de la ministración mensual por ciudadano
PAN	2017 (Desafiliación)	\$24,232.29	1	%0.03

Por consiguiente, la sanción impuesta al **PAN** no es de carácter gravoso, si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual correspondiente al mes de septiembre de este año.

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción cometida por el **PAN** (especialmente los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con el financiamiento que recibe del **INE** para el mes de septiembre de dos mil dieciocho, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno

⁴⁸ Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.

se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político sancionado.

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el partido político de mérito —tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagar sin que ello afecte sus operaciones ordinarias, además de que las sanciones son proporcionales a las faltas cometidas y se estima que, sin resultar excesivas ni ruinosas, pueden generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la *Sala Superior* en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-250/2009⁴⁹, es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

CUARTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE LILIANA GOLLAS TREJO COMO MILITANTE. En tal sentido, se tiene que la voluntad de la denunciante es no pertenecer al *PAN*, por lo que se debe vincular al partido político, para que, de ser el caso, en el supuesto que la quejosa continúe en su padrón de militantes, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentó su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, los medios de prueba que amparen el cumplimiento.

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017,⁵⁰ de cinco de enero de dos mil diecisiete, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el *INE*, que lo vincule con un instituto político en particular.

Asimismo, se considera procedente es remitir copia certificada del escrito de queja con sus respectivos anexos al *PAN*, para que en el ámbito de su competencia realice las investigaciones pertinentes e instaure los procedimientos que su

⁴⁹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm>

⁵⁰ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/JDC/2/SUP_2017_JDC_2-626321.pdf

normativa interna establezca y de ser el caso, finque las responsabilidades que correspondan, por la omisión de sus órganos internos, de desafiliar a **Liliana Gollas Trejo**.

Sobre esto último, a similar conclusión arribó este Consejo General en la resolución INE/CG536/2018, de veinte de junio de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/GPM/JL/OAX/28/2018.

QUINTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la *Constitución*,⁵¹ se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previsto en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara **fundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra del **PAN**, al infringir las disposiciones electorales de libre afiliación de **Liliana Gollas Trejo** en su modalidad de no permitirle ser desafiliada de dicho instituto político en términos de lo establecido en el Considerando SEGUNDO de esta Resolución.

SEGUNDO. En términos del Considerando TERCERO de la presente Resolución, se impone al **PAN**, una multa por la omisión de desafiliar a **Liliana Gollas Trejo** de su padrón de militantes, una multa de **321** (trescientos veintiún) Unidades de

⁵¹ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.**”

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/LGT/JD22/MEX/207/2018

Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a **\$24,232.29** (veinticuatro mil doscientos treinta y dos pesos 29/100 M. N.) [Omisión de desafiliación de 2017].

TERCERO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7 de la LGIPE, el monto de la multa impuesta al **PAN**, será deducido de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su Considerando TERCERO.

CUARTO. Se vincula al *PAN* para que, de ser el caso, en el supuesto que la quejosa continúe en su padrón de militantes, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentó su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, los medios de prueba que amparen el cumplimiento, conforme a lo dispuesto en su Considerando CUARTO.

QUINTO. Se da vista al *PAN* a efecto de que en el ámbito de su competencia realice las investigaciones pertinentes e instaure los procedimientos que su normativa interna establezca y de ser el caso, finque las responsabilidades que correspondan, por la omisión de sus órganos internos, de desafiliar a una ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en el Considerando CUARTO.

SEXTO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previsto en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Notifíquese personalmente a Liliana Gollas Trejo; así como al **PAN**, por conducto de su respectivo representante ante este Consejo General; y por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero Presidente, procedería ahora a la consideración del Proyecto de Resolución identificado como el apartado 1.1. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario del Consejo. _____

No sé si quiera la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela que lo ha reservado, hacer uso de la palabra, entiendo en todo caso que es para estar proponiendo como lo dijo en el momento de la reserva, su retiro o su devolución para poder ser conocido en una sesión posterior del Consejo General. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel. _____

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. _____

Buenas tardes a todos y a todas. _____

Estoy de acuerdo con la propuesta que hace la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, únicamente me gustaría que este periodo lo utilicemos para reflexionar en el hecho de algo que nos ordenó expresamente, en este caso la Sala Superior, que se hiciera un análisis integral de los hechos y de las pruebas presentadas considerando el contexto. _____

La verdad es que, en este caso específico se están haciendo denuncias que tienen que ver con acoso laboral, violencia política contra las mujeres por razón de género, discriminación que se está aislando a una persona, entonces vale la pena que se siga al pie de la letra lo que nos ordenó la Sala Superior en la valoración de las pruebas, no se puede hacer una valoración ordinaria y aislada de cada una de estas pruebas. _____

Entonces, exclusivamente por eso, lléguese a la determinación que se tenga que llegar, pero sí se tiene que hacer esta valoración de manera muy puntual considerando las infracciones que se están denunciando en este caso. _____

Otra cuestión que quisiera que se valorara, es el hecho de que la denunciante va a terminar su nombramiento en el mes de noviembre, entonces es importante que para que realmente estemos apegados a un principio de legalidad y de impartición de justicia pronta y expedita esto se pueda resolver antes de esa fecha. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel. _____

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, le voy a pedir que someta a votación la devolución del Proyecto de Resolución que nos ocupa. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si el Proyecto de Resolución identificado en el orden del día como el apartado 1.1 es retirado de esta sesión para mayores consideraciones tal y como ha sido propuesto. _____

Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo. _____

10 votos. _____

¿En contra? _____

1 voto. _____

Aprobado por 10 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 1 voto en contra (del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña), el retiro del Proyecto de Resolución del orden del día, Consejero Presidente. _____

(Texto del Acuerdo de devolución aprobado INE/CG1254/2018) Pto. 1.1 _____

INE/CG1254/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE ORDENA LA DEVOLUCIÓN A LA UNIDAD DE TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE DECLARA INFUNDADO EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016 INSTAURADO POR CLAUDIA CARRILLO GASCA, EN SU CARÁCTER DE CONSEJERA ELECTORAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, EN CONTRA DE LA CONSEJERA PRESIDENTA, MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA, DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES DEL PROPIO INSTITUTO, JUAN MANUEL PÉREZ ALPUCHE, THALÍA HERNÁNDEZ ROBLEDO; ASÍ COMO DE ALFREDO FIGUEROA OREA, TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL; JOSÉ LUIS GONZÁLEZ NOLASCO, DIRECTOR DE PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN; LUIS ALBERTO ALCOCER ANGUIANO, DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y VÍCTOR MANUEL INTERIÁN LÓPEZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, TODOS DEL INSTITUTO ELECTORAL REFERIDO, ASÍ COMO DE ARMANDO MIGUEL PALOMO GÓMEZ, REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA; JUAN ALBERTO MANZANILLA LAGOS, REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y MAURICIO MORALES BEIZA, REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, TODOS ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL MISMO INSTITUTO ELECTORAL LOCAL, TODA VEZ QUE DEL ANÁLISIS DE LOS HECHOS DENUNCIADOS NO SE ADVIERTE QUE EXISTAN ELEMENTOS QUE PERMITAN A ESTA AUTORIDAD CONCLUIR QUE LOS ACTOS U OMISIONES ATRIBUIDAS A LOS SUJETOS DENUNCIADOS CONSTITUYAN, ACOSO LABORAL O VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO EN CONTRA DE LA QUEJOSA

ANTECEDENTES

I. El cinco de septiembre de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, escrito original de queja firmado por Claudia Carrillo Gasca, Consejera Electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo, quien hizo del conocimiento de esta autoridad, hechos que desde su perspectiva, constituyen violaciones a la normativa electoral; lo anterior, derivado de la supuesta realización de acciones y omisiones por un grupo de funcionarios estatales, integrantes del Instituto Electoral local y representantes de partidos políticos, dirigidas a menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político electorales de la quejosa, o de las prerrogativas inherentes al cargo público, que ostenta como Consejera Electoral del Instituto Electoral local referido; conductas que a su juicio podrían constituir un presunto ejercicio de violencia política por razón de género.

II. El seis de septiembre siguiente, el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de este Instituto, ordenó el registró de la queja referida en el punto anterior, y la apertura del Cuaderno de Antecedentes con nomenclatura UT/SCG/CA/CCG/CG/84/2016.

III. El diecinueve de septiembre del mismo año, mediante Acuerdo de la Unidad Técnica mencionada, se acordó no iniciar procedimiento administrativo sancionador respecto de las conductas referidas en la queja de mérito, al considerar que no se acreditó alguna conducta que pudiera vulnerar la normatividad electoral respecto a la presunta violencia política por razón de género. Dicho acuerdo fue controvertido a través del medio de impugnación SUP-JE-102/2016, mismo que fue resuelto el diecinueve de octubre del dos mil dieciséis por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que determinó revocar el acuerdo de referencia.

IV. El veinte de octubre del dos mil dieciséis, en cumplimiento a lo establecido en la sentencia de la Sala Superior a que se hizo referencia en el punto anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del *Reglamento de Quejas*, se ordenó continuar la investigación preliminar de los hechos denunciados, para, en su caso, iniciar el procedimiento administrativo sancionador correspondiente.

V. El veintiocho de octubre de esa anualidad, se ordenó la conclusión del cuaderno de antecedentes y la apertura de un procedimiento sancionador ordinario; asimismo, se acordó dar vista a diversas autoridades para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, determinaran lo que en derecho correspondiera respecto de diversas conductas que no son competencia de este Instituto.

VI. Mediante acuerdo de tres de noviembre de dos mil dieciséis, se ordenó admitir por la vía ordinaria el procedimiento administrativo sancionador, y registrarse con la nomenclatura UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016.

VII. Desahogadas las diligencias de investigación preliminar realizadas, en la Octogésima Cuarta Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el seis de septiembre de dos mil dieciocho, la Comisión de Quejas y Denuncias de este Instituto analizó el Proyecto de Resolución del procedimiento ordinario sancionador de mérito, en la que resolvió su aprobación por mayoría de dos votos a favor de la Consejera Presidenta de la Comisión, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera y del Consejero Electoral Doctor Benito Nacif Hernández; con el voto en contra de la Consejera Electoral Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez.

VIII. En la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral del doce de septiembre de la presente anualidad, se sometió a la consideración de sus integrantes el *Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se declara infundado el procedimiento ordinario sancionador con número de expediente UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016 instaurado por Claudia Carrillo Gasca, en su carácter de Consejera Electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo, en contra de la Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina, de los Consejeros Electorales del propio Instituto, Juan Manuel Pérez Alpuche, Thalía Hernández Robledo; así como de Alfredo Figueroa Orea, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social; José Luis González Nolasco, Director de Partidos Políticos y Radiodifusión; Luis Alberto Alcocer Anguiano, Director de Organización y Víctor Manuel Interián López, Director de Administración, todos del Instituto Electoral referido, así como de Armando Miguel Palomo Gómez, representante del Partido Nueva Alianza; Juan Alberto Manzanilla Lagos, representante del Partido Revolucionario Institucional y Mauricio Morales Beiza, representante del Partido del Trabajo, todos ante el Consejo General del mismo Instituto Electoral local.*

CONSIDERANDO

1. Que el artículo 469, párrafo 5, incisos d) y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que en la sesión en que conozca del Proyecto de Resolución, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral podrá rechazarlo y ordenar a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva elaborar un nuevo proyecto en el sentido de los argumentos, consideraciones y razonamientos expresados por la mayoría, entendiéndose con ello que se aprueba un acuerdo de devolución.
2. Que el artículo 54, párrafo 1, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, establece que si un proyecto es rechazado por el Consejo General, se regresará a la Unidad Técnica a efecto que lo reformule, conforme con los razonamientos expuestos en la sesión. Asimismo, refiere que, de requerirse la realización de nuevas diligencias, la Unidad Técnica procederá en términos de lo dispuesto en el artículo 53, párrafo 1, fracción II, del mismo ordenamiento; con la salvedad que, en este caso, el proyecto lo presentará directamente a Consejo General para su discusión y aprobación.
3. Que el numeral 26, párrafo 10, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, prevé que en caso de que el Consejo no apruebe un Proyecto de Resolución relativo a un procedimiento sancionador ordinario, sobre financiamiento y gasto, o en materia de fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos, y considerara necesario la elaboración de un nuevo proyecto para presentarse en una sesión posterior, el Secretario, con el apoyo de la Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica responsable, elaborará el Acuerdo del Consejo, en el que consten los fundamentos y motivos por los cuales se determinó la no aprobación del Proyecto y el resultado del estudio sobre los puntos de controversia, o bien, sobre los motivos y fundamentos de determinada decisión, a fin de dotar de certeza y seguridad jurídica a los involucrados en el acto jurídico.

4. Que en la sesión extraordinaria del Consejo General, citada en el antecedente VIII del presente Acuerdo, la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela Herrera propuso devolver el Proyecto de Resolución referido, para ser analizado en una sesión posterior del Consejo General, lo que fue avalado por la mayoría de los integrantes de dicho órgano colegiado.

Con base en los Antecedentes y Considerandos expresados, y de conformidad con lo establecido en los artículos 41, párrafo 1, Base V, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, numeral 1 incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, incisos d) y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 26, numeral 10 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el Consejo General emite el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. Se devuelve el *Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se declara infundado el procedimiento ordinario sancionador con número de expediente UT/SCG/Q/CCG/CG/54/2016 instaurado por Claudia Carrillo Gasca, en su carácter de Consejera Electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo, en contra de la Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina, de los Consejeros Electorales del propio Instituto, Juan Manuel Pérez Alpuche, Thalía Hernández Robledo; así como de Alfredo Figueroa Orea, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social; José Luis González Nolasco, Director de Partidos Políticos y Radiodifusión; Luis Alberto Alcocer Anguiano, Director de Organización y Víctor Manuel Interián López, Director de Administración, todos del Instituto Electoral referido, así como de Armando Miguel Palomo Gómez, representante del Partido Nueva Alianza; Juan Alberto Manzanilla Lagos, representante del Partido Revolucionario Institucional y Mauricio Morales Beiza, representante del Partido del Trabajo, todos ante el Consejo General del mismo Instituto Electoral local, a fin de ser puesto a consideración de los integrantes del Consejo General, en una posterior sesión.*

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución identificado en el orden del día con el número de apartado 1.2. _____

Fue éste reservado por el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña y por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. _____

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. _____

De forma muy breve, solo para señalar que en este tipo de asuntos de indebida filiación estamos encontrando en algunos casos aseveraciones de los ciudadanos, las ciudadanas e involucradas que están haciendo del conocimiento de estos hechos a la autoridad, que a su vez hubo coacción o incluso, posiblemente, dádiva para realizar dicha afiliación. _____

Por esa razón, considero que el criterio que debe de imperar es que esos asuntos también se investiguen, se emplace, se amplíe el objeto de la investigación, o bien, que se abra un nuevo procedimiento, pero evidentemente no podemos dejar, esos hechos también denunciados, sin estar siendo atendidos. _____

Esa es la reflexión que hago en esta ocasión. _____

Es cuanto, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. _____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:

Muchas gracias, Consejero Presidente. _____

Creo que, este es un punto que es importante analizar, estamos teniendo tanto este asunto como el apartado 1.22, guarda una similitud y es la razón de la reserva de ambos, que tienen que ver con que el partido político, cuando se denuncia la indebida

afiliación el partido político, que de hecho es el mismo partido político en ambos casos, es el Partido del Trabajo en ambos casos, nos presenta la carta de afiliación. _____

Y cuando le corremos traslado a los denunciantes con esta carta de afiliación, lo que nos contestan es que o “A”, firmaron, pero con un objeto de una dádiva o “B” fueron coaccionados. _____

En este caso en particular, una de las ciudadanas si bien es cierto que firmó la hoja esta fue en blanco y fue para la requisición de una despensa. _____

Otro caso dice: “el escrito que presentó el partido político, en donde supuestamente solo se afilió, fue llenada a partir de la Credencial de Elector que me fue solicitada a cambio de seguir trabajando en un mercado de ruedas, jamás se informó que estaría siendo afiliada a dicho partido político, a lo cual a base de engaños tenía que firmar un pequeño recuadro en una hoja, para una supuesta credencial que se me acreditaría, como vendedora en dicho mercado. _____

Además, la fotografía que se me tomó también referente a la misma credencial para acreditarme como vendedora en la opción grado de estudios, se señala que el grado de estudios es la primaria, cuando lo cual es completamente falso y anexo copia de la cédula para acreditar el grado de estudios que verdaderamente tenía”. _____

En otro caso nos dice: que el Coordinador del partido político creó un Comité Ciudadano, ofreciendo apoyos a los de ciertos sectores, argumentando que quienes fueran beneficiados no estarían ligados ni comprometidos de ninguna forma con ese partido político, por lo que no habría afiliación y esa es la causa de la firma. _____

Y en otro caso dice: “me pidieron copia de mi Credencial para Votar, y nos pidieron que firmáramos un documento, según era para la despensa que nos darían”. _____

Estamos hablando de una denuncia de una posible alteración de la voluntad, de una coacción, de una entrega de dádivas, de un engaño a los ciudadanos, eso es lo que nos están señalando los ciudadanos que acudieron a decirnos que no se habían afiliado voluntariamente. _____

En el Proyecto de Resolución lo que se propone es declararlo infundado porque no nos dieron circunstancias de modo, tiempo y lugar y, por otra parte, dejar a salvo los derechos de estas ciudadanas y ciudadanos, para que puedan iniciar una queja, precisamente por esta coacción o estas dádivas. _____

El problema es que si la voluntad fue coaccionada, lo que hay es un vicio de la voluntad, es decir, no puede darse por buena afiliación si fue una afiliación viciada y, para que podamos decir si fue una afiliación viciada o no fue una afiliación viciada, primero se tiene que investigar y no dejar a salvo los derechos, porque si llegase a ocurrir que, como se están dejando a salvo los derechos, los ciudadanos acuden, presentan la denuncia, dan circunstancias de modo, tiempo y lugar y se investiga, resulta que vamos a decir que la coacción se dio para ser afiliados pero la afiliación fue debida, es un contrasentido, por lo que, me parece que en estos casos, al igual insisto, que en el apartado 1.22 y esa fue la razón de reservar los 2, lo que tendremos que hacer es escindir estos casos para que se hiciera la investigación correspondiente, respecto de los mismos. _____

No es un tema de dejar a salvo los derechos, sin una obligación que tenemos que asumir oficiosamente de realizar esta investigación, no nos dieron circunstancias de modo, tiempo y lugar, no porque no estaban presentando una denuncia, estaban dando una explicación de por qué aparecía su firma en una determinada hoja, a partir de esa explicación que nos dan, lo que le corresponde a la autoridad hacer es investigar, para que si se acredita lo que nos están diciendo los ciudadanos, por supuesto que hay 2 infracciones por parte del partido político, pero si no se acredita lo que nos están diciendo, no se tiene por que responsabilizar al partido político, ya que habría todos los elementos de una afiliación debida. _____

Ante esta circunstancia, insistiría que estos son asuntos que no hemos conocido en estos términos, hemos conocido cuando nos alegan que se falsificó su firma, pero no habíamos conocido asuntos donde se alega que hubo entregas de despensas, que

hubo engaños, que hubo coacciones, que hubo dádivas, y este es el criterio que tendría que sentar esta autoridad._____

En relación con el resto del Proyecto de Resolución lo comparto, solamente no puedo compartir el asunto del caso específico de las coacciones._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín._____

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, el representante del Partido del Trabajo desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?_____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Por supuesto._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la palabra el Maestro Pedro Vázquez_____

El C. representante del Partido del Trabajo, Maestro Pedro Vázquez González: Usted reconoce que el quejoso no aportó los elementos suficientes como para acreditar su dicho, ¿de quién es responsabilidad presentar las pruebas del partido político o de quien se queja o se duele de una conducta desde su punto de vista incorrecta?, la pregunta es si no aporta los elementos de como el interesado para que la autoridad tome una decisión, no le veo el sentido de que de manera oficiosa usted esté planteando una investigación._____

La pregunta es ¿por qué esa actitud de parte suya de investigar algo que no se aportaron los elementos en su momento procesal oportuno?_____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para responder tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín._____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, señor representante._____

¿Por qué la actitud mía? Porque me parece que hay una obligación que tiene esta autoridad de garantizar los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Sí hay un escrito donde aparece la filiación con firma, pero también hay una denuncia por parte

de la ciudadana o el ciudadano respecto a cómo apareció esa firma, yo no doy por válido el dicho del ciudadano y de la ciudadana, precisamente por eso pido que se investigue, para que podamos tener los elementos para llegar a una conclusión o llegar a otra conclusión._____

Aquí lo que se tiene que tener, son todos los elementos y para poder tener estos elementos lo que se tiene que llevar a cabo es una investigación, la investigación inicial por la afiliación indebida se llevó a cabo con el puro dicho del ciudadano, los ciudadanos acuden y nos dicen: “yo no estoy afiliado a este partido político”, y de ahí se despliega el actuar de esta autoridad ante una afirmación con estas características, incluso tenemos este caso que señala que hay datos que no corresponden con la realidad, lo que le corresponde a esta autoridad es investigar, como lo señalan en los distintos casos donde se cuestionan las firmas de las ciudadanas y los ciudadanos._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín._____

Si no hay más intervenciones le voy a pedir al Secretario del Consejo, que tome la votación correspondiente._____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Sí, a partir de la argumentación creo que se podría hacer una votación en lo general y una en lo particular, por lo que hace estos 4 casos que se han mencionado para que se siga haciendo investigaciones escindir estos casos para hacer investigación, como lo ha propuesto la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín y entiendo que acompaña el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña._____

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 1.2, escindiendo de esta votación en lo general los 4 casos mencionados._____

Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo._____

Aprobado por unanimidad en lo general (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello)._____

Ahora, someto a su consideración la propuesta de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín a fin de escindir estos casos, si no tuviera la mayoría sometería a su consideración el Proyecto de Resolución en los términos._____

¿Les parece que procedamos? _____

O al revés primero, como viene en el Proyecto de Resolución, que no es escindir estos 4 casos y así lo resolveríamos._____

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo particular, en el caso del apartado 1.2 los 4 casos a los cuales se ha hecho referencia como vienen en el Proyecto de Resolución._____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo._____

9 votos._____

¿En contra? _____

2 votos._____

Aprobado como viene en el Proyecto de Resolución en lo particular por 9 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero Presidente._____

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG1255/2018) Pto. 1.2_____

INE/CG1255/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO

EXPEDIENTE:

UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

DENUNCIANTES: JOVANA BERENICE
CASTAÑEDA BÁEZ Y OTROS

DENUNCIADO: PARTIDO DEL TRABAJO

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017 QUE SE DERIVA DE DIVERSAS QUEJAS PRESENTADAS POR NOVENTA Y UN CIUDADANOS (91), QUIENES PRESENTARON ESCRITOS POR LOS CUALES, CADA UNO DE ELLOS, HIZO DEL CONOCIMIENTO DE ESTA AUTORIDAD HECHOS PRESUNTAMENTE CONTRAVENTORES DE LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, RELACIONADOS CON LA APARICIÓN DE CIUDADANOS QUE ASPIRABAN AL CARGO DE SUPERVISOR ELECTORAL Y/O CAPACITADOR ASISTENTE ELECTORAL, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018, Y QUE SE ENCONTRARON EN EL PADRÓN DEL PARTIDO DEL TRABAJO PRESUNTAMENTE SIN SU CONSENTIMIENTO

Ciudad de México, 12 de septiembre de dos mil dieciocho.

GLOSARIO	
COFIPE	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Comisión	Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
DEPPP	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
DERFE	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
INE	Instituto Nacional Electoral
LGIPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

GLOSARIO	
LGPP	Ley General de Partidos Políticos
PT	Partido del Trabajo
Reglamento de Quejas	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
Sala Superior	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Tribunal Electoral	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

ANTECEDENTE

Como se refirió anteriormente, el presente procedimiento deriva de diversas quejas presentadas por noventa y un ciudadanos (91),¹ quienes hicieron del conocimiento de esta autoridad hechos presuntamente contraventores de la normatividad electoral, consistente en la presunta afiliación indebida de los ciudadanos que enseguida se enlistan, porque no medió consentimiento para ello ni para el uso de sus datos personales, conducta que se atribuye al *PT*.

No.	Ciudadano	Fecha de presentación de queja
1	Carlos Eduardo Alemán Leal	13/11/2017
2	Elizabeth Jiménez Avellaneda	21/11/2017
3	Adriana Pérez Gómez	23/11/2017
4	Jovana Berenice Castañeda Báez	21/02/2018
5	Flor Alicia Duarte Aguilar	03/11/2017
6		
7	Karina Rosales Melquiades	04/12/2017
8	Juan Carlos Salcido Álvarez	04/12/2017
9	Amada Dávalos Candelario	02/12/2017
10	Francisca Evelia Ocampo Nava	08/12/2017
11	José Francisco Obregón Martínez	04/12/2017
12	Verónica Zaleta Chávez	06/12/2017
13	Elena Ramírez Guerrero	06/12/2017
14	Nubia Selene Alejo Pascacio	06/12/2017
15	María de Jesús Huerta González	05/12/2017
16	Humberto Guillén Tamayo	04/12/2017
17	Karla Mariela Carlón Millanes	07/12/2017

¹ Mediante acuerdo de ocho de mayo de dos mil dieciocho se determinó la escisión de los ciudadanos **Eduardo Gutiérrez Ríos (6)**, **Irma Rodríguez Maldonado (53)** y **Juan Gabriel Ramírez Sosa (82)**, a fin de que los hechos denunciados por ellos fueran conocidos y resueltos en el procedimiento sancionador ordinario identificado como UT/SCG/Q/JGRS/CG/130/2018. En mérito de lo anterior, las celdas correspondientes a tales numerales aparecen sin nombre de quejoso.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No.	Ciudadano	Fecha de presentación de queja
18	Irais Jacqueline Gálvez Botello	11/12/2017
19	Miriam Ortiz Chamorro	05/12/2017
20	Alma Gabriela Ríos Sánchez	08/12/2017
21	Mario Armando Pamas Reyna	07/11/2017
22	Anallely Hernández Hernández	07/12/2017
23	José Refugio Tagle Payán	04/12/2017
24	Juan Arroyo Mendoza	06/12/2017
25	Claudia Yuridia Terrazas Abarca	04/12/2017
26	Alejandra García Hernández	01/12/2017
27	Brandon Hernández Vázquez	08/12/2017
28	Richard Wilder Zenteno Grajales	13/12/2017
29	Araceli Jiménez Díaz	08/12/2017
30	Florentino Yectli Solís	11/12/2017
31	Yessica Bárcenas Benítez	11/12/2017
32	Elvira Fernández Cornejo	13/12/2017
33	Oliver Juamat Gómez León	14/12/2017
34	Erika Jiménez Rueda	15/12/2017
35	Rosa Argentina Guadarrama Rosales	12/12/2017
36	Jesús Alberto Meráz Navarrete	12/12/2017
37	Ariana María Domínguez Cenicerros	12/12/2017
38	María Guadalupe Vargas Durán	11/12/2017
39	Georgina Edith López Sosa	13/12/2017
40	Diana García Mejía	09/12/2017
41	Víctor Ignacio González Legarda	14/02/2017
42	Ariana Itzel Linares Sánchez	12/12/2017
43	Rosa Elena González Alemán	08/12/2017
44	Silvia Aguilar Córdova	08/12/2017
45	Juan Carlos Mora García	20/12/2017
46	Gilberta Casilda Vázquez Álvarez	18/12/2017
47	Elena Orta Flores	18/12/2017
48	María Yanelly Palmas Iñiguez	15/12/2017
49	Leonel Efrén Luque González	16/12/2017
50	Rosario Gómez Ruiz	16/12/2017
51	Ma. Guadalupe García Llamas	20/12/2017
52	Aurora Reyes Mejía	05/12/2017
53		
54	Rigoberto Segura Solís.	18/12/2017
55	Rogelio Díaz Saavedra	19/12/2017
56	Elvia de la Cruz Acosta	19/12/2017
57	María del Rosario Román Antúnez.	20/12/2017
58	Jaqueline Alfaro Jiménez	20/12/2017
59	Ma. Anita Gutiérrez Rodríguez	07/12/2017
60	Samuel Evaristo Tapia Rubio	14/12/2017

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No.	Ciudadano	Fecha de presentación de queja
61	Perla Azenet García Garza	15/12/2017
62	Graciela Marina Rivera Zamudio	15/12/2017
63	Dionisio Fernández Hernández	20/12/2017
64	Alicia Sánchez Flores	20/12/2017
65	María Natividad Ruiz Meza	20/12/2017
66	Martín Dueñas Ortiz	20/12/2017
67	Baldomero Cota Montaña	18/12/2017
68	Erika Susana González Franco	06/12/2017
69	Nora Graciela Reveles Castañeda	20/12/2017
70	María Elena Galván Álvarez	18/12/2017
71	Rosa Ícela Bustamante Coronel	19/12/2017
72	Mónica Damiana Leyva Buitimea	18/12/2017
73	Raquel Salazar Flores	21/12/2017
74	Juan Carlos Meza Viveros	21/12/2017
75	Jorge Alfredo López Manzanares	22/12/2017
76	Guadalupe Alejandra Fregoso	20/12/2017
77	Juan Antonio Meléndez Hernández	14/12/2017
78	Julio Iván Medina Martínez	19/12/2017
79	Mikhail Tolentino Jiménez	08/12/2017
80	Josefina Jiménez Jiménez	08/12/2017
81	Cristóbal Hernández Mercado	20/12/2017
82		
83	Beatriz Hernández Bello	19/12/2017
84	Víctor Manuel Álvarez Martínez	27/12/2017
85	María Guadalupe Oliva Fernández	20/12/2017
86	Verónica Tenorio González	03/01/2018
87	Beatriz Chávez Flores	20/12/2017
88	Zacarías Victoriano Chino	04/01/2018
89	Víctor Manuel Sánchez Rodríguez	20/12/2017
90	Cirenia Segundo Barrios	08/01/2018
91	Juan Carlos Santana Sánchez	08/01/2018

R E S U L T A N D O

I. Registro, admisión y reserva de emplazamiento.² El veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral instruyó el registro del procedimiento sancionador ordinario, al cual se le asignó la

² Visible a páginas 28 a 36 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

clave **UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017**, por la presunta afiliación indebida y el uso indebido de datos personales por parte del *PT*.

En el acuerdo en cita, se admitió a trámite el procedimiento de sanción señalado con anterioridad y se reservó lo relativo al emplazamiento de las partes; asimismo, se ordenó la realización de diversas diligencias de investigación.

Finalmente, se ordenó la notificación de dicho acuerdo de admisión al *PT*, así como a los ciudadanos denunciantes.

II. Diligencias de investigación. Con el objeto de proveer lo conducente y para la debida integración del presente asunto, la autoridad instructora determinó requerir, en distintos momentos, a los sujetos que se indican a continuación:

Acuerdo de 27 de noviembre de 2017 ³		
Sujeto	Oficio-Fecha de notificación	Oficio-Fecha de respuesta
<i>PT</i>	INE-UT/9034/2017 01 de diciembre de 2017. ⁴	REP-PT-INE-PVG-156/2017 ⁵ 05 de diciembre de 2017
<i>DEPPP</i>	INE-UT/9035/2017 01 de diciembre de 2017. ⁶	Correo electrónico ⁷ 04 de diciembre de 2017
Vocal Ejecutivo de la 09 Junta Distrital Ejecutiva del <i>INE</i> en la Ciudad de México	INE-UT/9036/2017 01 de diciembre de 2017. ⁸	04 de diciembre de 2017 ⁹

Acuerdo de 11 de diciembre de 2017 ¹⁰		
Sujeto	Oficio-Fecha de notificación	Oficio-Fecha de respuesta
<i>PT</i>	INE-UT/9363/2017 01 de diciembre de 2017. ¹¹	REP-PT-INE-PVG-159/2017 15 de diciembre de 2017 ¹²
<i>DEPPP</i>	INE-UT/9364/2017 12 de diciembre de 2017. ¹³	Correo electrónico ¹⁴ 14 de diciembre de 2017

³ Visible a páginas 28 a 36 del expediente.

⁴ Visible a página 39 del expediente.

⁵ Visible a páginas 55 a 57 y anexo de 58 a 64 del expediente.

⁶ Visible a página 38 del expediente.

⁷ Visible a páginas 52 a 53 del expediente.

⁸ Visible a página 42 del expediente.

⁹ Visible a páginas 44 a 51 del expediente.

¹⁰ Visible a páginas 151 a 157 del expediente.

¹¹ Visible a página 183 del expediente.

¹² Visible a páginas 230 a 231 y anexo de 232 a 236 del expediente.

¹³ Visible a página 182 del expediente.

¹⁴ Visible a páginas 227 a 229 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

Acuerdo de 12 de diciembre de 2017 ¹⁵		
Sujeto	Oficio-Fecha de notificación	Oficio-Fecha de respuesta
<i>PT</i>	INE-UT/9445/2017 15 de diciembre de 2017. ¹⁶	REP-PT-INE-PVG-162/2017 21 de diciembre de 2017 ¹⁷
<i>DEPPP</i>	INE-UT/9446/2017 15 de diciembre de 2017. ¹⁸	Correo electrónico ¹⁹ 18 de diciembre de 2017

Acuerdo de 26 de diciembre de 2017 ²⁰		
Sujeto	Oficio-Fecha de notificación	Oficio-Fecha de respuesta
<i>PT</i>	INE-UT/9735/2017 28 de diciembre de 2017. ²¹	REP-PT-INE-PVG-002/2018 04 de enero de 2018 ²² REP-PT-INE-PVG-004/2018 04 de enero de 2018 ²³
<i>DEPPP</i>	INE-UT/9736/2017 28 de diciembre de 2017. ²⁴	Correo electrónico ²⁵ 04 de enero de 2018

Acuerdo de 08 de enero de 2018 ²⁶		
Sujeto	Oficio-Fecha de notificación	Oficio-Fecha de respuesta
<i>PT</i>	INE-UT/0460/2018 16 de enero de 2018. ²⁷	REP-PT-INE-PVG-007/2018 ²⁸ 22 de enero de 2018
<i>DEPPP</i>	INE-UT/0461/2018 16 de enero de 2018. ²⁹	Correo electrónico ³⁰ 22 de enero de 2018

Acuerdo de 22 de enero de 2018 ³¹		
Sujeto	Oficio-Fecha de notificación	Oficio-Fecha de respuesta
<i>PT</i>	INE-UT/1344/2018 24 de enero de 2018. ³²	30 de enero de 2018 ³³

¹⁵ Visible a páginas 213 a 223 del expediente.

¹⁶ Visible a página 264 del expediente.

¹⁷ Visible a páginas 435 a 436 y anexo de 437 a 445 y 542 a 543 y anexo de 544 a 554 del expediente.

¹⁸ Visible a página 250 del expediente.

¹⁹ Visible a páginas 368 a 370 del expediente.

²⁰ Visible a páginas 610 a 620 del expediente.

²¹ Visible a página 797 del expediente.

²² Visible a páginas 894 a 896 y anexo de 897 a 940 del expediente.

²³ Visible a página 993 y anexo de 994 a 996 del expediente.

²⁴ Visible a página 796 del expediente.

²⁵ Visible a páginas 947 a 949 del expediente.

²⁶ Visible a páginas 1135 a 1150 del expediente.

²⁷ Visible a página 1172 del expediente.

²⁸ Visible a páginas 1193 a 1194 y anexo de 1195 a 1213 del expediente.

²⁹ Visible a página 1175 del expediente.

³⁰ Visible a páginas 1214 a 1216 del expediente.

³¹ Visible a páginas 1264 a 1272 del expediente.

³² Visible a página 1344 del expediente.

³³ Visible a páginas 1432 a 1438 y anexo de 1440 a 1555 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

Acuerdo de 22 de enero de 2018 ³¹		
Sujeto	Oficio-Fecha de notificación	Oficio-Fecha de respuesta
DEPPP	INE-UT/0734/2018 24 de enero de 2018. ³⁴	Correo electrónico ³⁵ 25 de enero de 2018

Acuerdo de 06 de febrero de 2018 ³⁶		
Sujeto	Oficio-Fecha de notificación	Oficio-Fecha de respuesta
PT	INE-UT/1329/2018 08 de febrero de 2018. ³⁷	REP-PT-INE-PVG-024/2018 ³⁸ 13 de febrero de 2018

Acuerdo de 14 de febrero de 2018 ³⁹		
Sujeto	Oficio-Fecha de notificación	Oficio-Fecha de respuesta
PT	INE-UT/1602/2018 19 de febrero de 2018. ⁴⁰	REP-PT-INE-PVG-032/2018 23 de febrero de 2018 ⁴¹
Vocal Ejecutivo de la 09 Junta Distrital Ejecutiva del INE en la Ciudad de México	INE-UT/1603/2018 20 de febrero de 2018. ⁴²	22 de febrero de 2018 ⁴³

III. Emplazamiento.⁴⁴ El uno de marzo de dos mil dieciocho, se ordenó el emplazamiento al *PT*, para efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la conducta que se le imputó y aportara los medios de prueba que considerara pertinentes.

Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito.

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

³⁴ Visible a página 1281 del expediente.

³⁵ Visible a páginas 1428 a 1429 del expediente.

³⁶ Visible a páginas 1612 a 1617 del expediente.

³⁷ Visible a página 1619 del expediente.

³⁸ Visible a páginas 1627 a 1629 y anexo de 1630 a 1636 del expediente.

³⁹ Visible a páginas 1637 a 1641 del expediente.

⁴⁰ Visible a página 1643 del expediente.

⁴¹ Visible a páginas 1663 a 1664 y anexo de 1665 a 1667 del expediente.

⁴² Visible a página 1647 del expediente.

⁴³ Visible a página 1649 del expediente.

⁴⁴ Visible a páginas 1690-1706 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

Sujeto-Oficio	Notificación-Plazo	Oficio-Fecha de respuesta
<i>PT</i> INE-UT/2094/2018 ⁴⁵	Citatorio: ⁴⁶ 02 de marzo de 2018. Cédula: ⁴⁷ 05 de marzo de 2018. Plazo: 06 al 12 de marzo de 2018.	REP-PT-INE-PVG-043/2018 ⁴⁸ 12 de marzo de 2018

IV. Alegatos.⁴⁹ El dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a las partes, a efecto de que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera.

El acuerdo de vista para alegatos, se diligenció en los siguientes términos:

Denunciado

Sujeto-Oficio	Notificación-Plazo	Oficio-Fecha de respuesta
<i>PT</i> INE-UT/3510/2018 ⁵⁰	Notificación: ⁵¹ 21 de marzo de 2018. Plazo: 22 al 28 de marzo de 2018.	REP-PT-INE-PVG-058/2018 ⁵² 27 de marzo de 2018

Denunciantes

No	Quejosos-Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
1	Carlos Eduardo Alemán Leal INE/TAM/JD05/466/2018 ⁵³	Cédula: 21 de marzo de 2018. Plazo: 22 al 28 de marzo de 2018.	Sin respuesta
2	Elizabeth Jiménez Avellaneda INE/JDE03/VE/0173/2018 ⁵⁴	Cédula: 22 de marzo de 2018. Plazo: 23 al 29 de marzo de 2018.	Sin respuesta
3	Adriana Pérez Gómez INE/JD11-MICH/VE/162/2018 ⁵⁵	Cédula: 23 de marzo de 2018. Plazo: 26 al 30 de marzo de 2018.	Sin respuesta
4	Jovana Berenice Castañeda Báez INE-UT/3511/2018 ⁵⁶	Citatorio: 20 de marzo de 2018. Cédula: 21 de marzo de 2018. Plazo: 22 al 28 de marzo de 2018.	Sin respuesta
5	Flor Alicia Duarte Aguilar INE/MICH/JDE05/VS/0167/2018 ⁵⁷	Cédula: 21 de marzo de 2018. Plazo: 22 al 28 de marzo de 2018.	Sin respuesta

⁴⁵ Visible a página 1708 del expediente.

⁴⁶ Visible a página 1709-1716 del expediente.

⁴⁷ Visible a página 1717-1718 del expediente.

⁴⁸ Visible a páginas 1723-1725 del expediente.

⁴⁹ Visible a páginas 1752-1760 del expediente.

⁵⁰ Visible a página 1766 del expediente.

⁵¹ Visible a página 1766 del expediente.

⁵² Visible a páginas 1899-1903 y anexos a páginas 1904-1906 del expediente.

⁵³ Visible a página 2222 del expediente.

⁵⁴ Visible a página 2022 del expediente.

⁵⁵ Visible a página 2339 del expediente.

⁵⁶ Visible a página 1777 del expediente.

⁵⁷ Visible a página 2049 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Quejosos-Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
7	Karina Rosales Melquiades INE-UT/3512/2018 ⁵⁸	Cédula: 21 de marzo de 2018. Plazo: 23 al 29 de marzo de 2018.	Sin respuesta
8	Juan Carlos Salcido Álvarez INE/SIN/05JDE/VE/0467/2018 ⁵⁹	Cédula: 21 de marzo de 2018. Plazo: 23 al 29 de marzo de 2018.	Sin respuesta
9	Amada Dávalos Candelario INE/COL/JDE01/0349/2018 ⁶⁰	Citatorio: 21 de marzo de 2018 Cédula: 22 de marzo de 2018. Plazo: 23 al 29 de marzo de 2018.	Sin respuesta
10	Francisca Evelia Ocampo Nava INE/01JD/VS/0323/2018 ⁶¹	Cédula: 30 de marzo de 2018. Plazo: 02 al 06 de abril de 2018.	Sin respuesta
11	José Francisco Obregón Martínez INE/VS/JDE08/667/2018 ⁶²	Cédula: 26 de marzo de 2018. Plazo: 27 de marzo al 02 de abril de 2018.	Sin respuesta
12	Verónica Zaleta Chávez INE/TAM/02JDE/0514/2018 ⁶³	Cédula: 23 de marzo de 2018. Plazo: 26 al 30 de marzo de 2018.	28/03/2018 ⁶⁴
13	Elena Ramírez Guerrero INE/JDE05-VER/0961/2018 ⁶⁵	Cédula: 21 de marzo de 2018. Plazo: 22 al 28 de marzo de 2018.	Sin respuesta
14	Nubia Selene Alejo Pascacio INE/JDE05-VER/0962/2018 ⁶⁶	Cédula: 21 de marzo de 2018. Plazo: 22 al 28 de marzo de 2018.	Sin respuesta
15	María de Jesús Huerta González INE/OAX/01JD/VS/133/2018 ⁶⁷	Cédula: 22 de marzo de 2018. Plazo: 23 al 29 de marzo de 2018.	Sin respuesta
16	Humbetto Guillén Tamayo ⁶⁸	Cédula: 06 de abril de 2018. Plazo: 09 al 13 de abril de 2018.	Sin respuesta
17	Karla Mariela Carlón Millanes INE/04JDE-SON/VS/0407/2018 ⁶⁹	Estrados: 21 de marzo de 2018 Plazo: 22 al 28 de marzo de 2018.	Sin respuesta
18	Irais Jacqueline Gálvez Botello INE-UT/3513/2018 ⁷⁰	Citatorio: 21 de marzo de 2018 Cédula: 22 de marzo de 2018. Plazo: 23 al 29 de marzo de 2018.	Sin respuesta
19	Miriam Ortiz Chamorro INE/JDE05/VE/0547/2018 ⁷¹	Cédula: 22 de marzo de 2018. Plazo: 23 al 29 de marzo de 2018.	Sin respuesta
20	Alma Gabriela Ríos Sánchez INE/VS/JD12/NL/0488/2018 ⁷²	Cédula: 26 de marzo de 2018. Plazo: 27 de marzo al 02 de abril de 2018.	27/03/2018 ⁷³

⁵⁸ Visible a página 1788 del expediente.

⁵⁹ Visible a página 2349 del expediente.

⁶⁰ Visible a página 1986 del expediente.

⁶¹ Visible a página 2106 del expediente.

⁶² Visible a página 2003 del expediente.

⁶³ Visible a página 2209 del expediente.

⁶⁴ Visible a página 2229 del expediente.

⁶⁵ Visible a página 2001 del expediente.

⁶⁶ Visible a página 2094 del expediente.

⁶⁷ Visible a página 1866 del expediente.

⁶⁸ Visible a página 2332 del expediente.

⁶⁹ Visible a página 2292 del expediente.

⁷⁰ Visible a página 1842 del expediente.

⁷¹ Visible a página 2109 del expediente.

⁷² Visible a página 1951 del expediente.

⁷³ Visible a página 1957 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Quejosos–Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
21	Mario Armando Pamas Reyna INE/BC/JLE/VS/835/2018 ⁷⁴	Cédula: 22 de marzo de 2018. Plazo: 23 al 29 de marzo de 2018.	Sin respuesta
22	Anallely Hernández Hernández JDE01/VE/324/2018 ⁷⁵	Cédula: 21 de marzo de 2018. Plazo: 22 al 28 de marzo de 2018.	Sin respuesta
23	José Refugio Tagle Payán INE/JD06SIN/VS/904/2018 ⁷⁶	Cédula: 05 de abril de 2018. Plazo: 06 al 12 de abril de 2018.	06/04/2018 ⁷⁷
24	Juan Arroyo Mendoza INE/VS/177/2018 ⁷⁸	Cédula: 22 de marzo de 2018. Plazo: 23 al 29 de marzo de 2018.	Sin respuesta
25	Claudia Yuridia Terrazas Abarca INE/09JDE-GRO/VE/329/2018 ⁷⁹	Cédula: 22 de marzo de 2018. Plazo: 23 al 29 de marzo de 2018.	Sin respuesta
26	Alejandra García Hernández INE/JDE05TAB/1216/2018 ⁸⁰	Cédula: 09 de abril de 2018. Plazo: 10 al 16 de abril de 2018.	Sin respuesta
27	Brandon Hernández Vázquez INE/JDE04-ZAC/484/2018 ⁸¹	Cédula: 21 de marzo de 2018. Plazo: 22 al 28 de marzo de 2018.	Sin respuesta
28	Richard Wilder Zenteno Grajales INE/JDE02/VS/180/2018 ⁸²	Cédula: 22 de marzo de 2018. Plazo: 23 al 29 de marzo de 2018.	Sin respuesta
29	Araceli Jiménez Díaz INE/JDE02-ZAC/0600/2018 ⁸³	Cédula: 23 de marzo de 2018. Plazo: 26 al 30 de marzo de 2018.	Sin respuesta
30	Florentino Yectli Solís JDE06/VS/0585/18 ⁸⁴	Cédula: 21 de marzo de 2018. Plazo: 22 al 28 de marzo de 2018.	23/03/2018 ⁸⁵
31	Yessica Bárcenas Benítez INE/02JDE/VE/0352/2018 ⁸⁶	Cédula: 23 de marzo de 2018. Plazo: 26 al 30 de marzo de 2018.	Sin respuesta
32	Elvira Fernández Cornejo JDE01/0347/2018 ⁸⁷	Cédula: 21 de marzo de 2018. Plazo: 22 al 28 de marzo de 2018.	28/03/2018 ⁸⁸
33	Oliver Juamat Gómez León INE-UT/3514/2018 ⁸⁹	Citatorio: 20 de marzo de 2018. Cédula: 21 de marzo de 2018. Plazo: 22 al 28 de marzo de 2018.	Sin respuesta
34	Erika Jiménez Rueda INE/JDE/04/VS/207/2018 ⁹⁰	Cédula: 06 de abril de 2018 Plazo: 09 al 13 de abril de 2018.	12/04/2018 ⁹¹

⁷⁴ Visible a páginas 1993-1994 del expediente.

⁷⁵ Visible a página 2121 del expediente.

⁷⁶ Visible a página 2352 del expediente.

⁷⁷ Visible a páginas 2356-2357 del expediente

⁷⁸ Visible a página 1876 del expediente.

⁷⁹ Visible a página 2362 del expediente.

⁸⁰ Visible a página 2325 del expediente.

⁸¹ Visible a página 1770 del expediente.

⁸² Visible a página 1958 del expediente.

⁸³ Visible a página 2057 del expediente.

⁸⁴ Visible a página 1888 del expediente.

⁸⁵ Visible a página 1909 y anexos a páginas 1910-1918 del expediente.

⁸⁶ Visible a página 1886 del expediente.

⁸⁷ Visible a página 1860 del expediente.

⁸⁸ Visible a páginas 1939-1940 del expediente.

⁸⁹ Visible a página 1793 del expediente.

⁹⁰ Visible a página 2143 del expediente.

⁹¹ Visible a páginas 2358-2359 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Quejosos–Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
35	Rosa Argentina Guadarrama Rosales INE/VS/JDE08/668/2018 ⁹²	Estrados: 27 de marzo de 2018 Citatorio: 26 de marzo de 2018. Plazo: 28 de marzo al 03 de abril de 2018.	Sin respuesta
36	Jesús Alberto Meráz Navarrete INE/VS/JDE08/669/2018 ⁹³	Estrados: 27 de marzo de 2018 Citatorio: 26 de marzo de 2018. Plazo: 28 de marzo al 03 de abril de 2018.	Sin respuesta
37	Ariana María Domínguez Cenicerros INE/VS/JDE08/670/2018 ⁹⁴	Estrados: 27 de marzo de 2018 Citatorio: 26 de marzo de 2018. Plazo: 28 de marzo al 03 de abril de 2018.	Sin respuesta
38	María Guadalupe Vargas Durán INE/VS/JDE08/671/2018 ⁹⁵	Cédula: 28 de marzo de 2018. Plazo: 29 de marzo al 04 de abril de 2018.	Sin respuesta
39	Georgina Edith López Sosa INE/06JD/0546/2018 ⁹⁶	Citatorio: 21 de marzo de 2018. Cédula: 22 de marzo de 2018. Plazo: 23 al 29 de marzo de 2018.	Sin respuesta
40	Diana García Mejía INE/JDE03/VE/0173/2018 ⁹⁷	Cédula: 21 de marzo de 2018. Plazo: 22 al 28 de marzo de 2018.	Sin respuesta
41	Víctor Ignacio González Legarda INE/VS/JDE08/672/2018 ⁹⁸	Cédula: 26 de marzo de 2018. Plazo: 27 de marzo al 02 de abril de 2018.	Sin respuesta
42	Ariana Itzel Linares Sánchez INE/JDE05/VE/0548/2018 ⁹⁹	Cédula: 22 de marzo de 2018. Plazo: 23 al 29 de marzo de 2018.	Sin respuesta
43	Rosa Elena González Alemán INE/JD19-VER/447/2018 ¹⁰⁰	Cédula: 22 de marzo de 2018. Plazo: 23 al 29 de marzo de 2018.	23/03/2018 101
44	Silvia Aguilar Córdova INE/JDE03/VE/0173/2018 ¹⁰²	Cédula: 21 de marzo de 2018. Plazo: 22 al 28 de marzo de 2018.	Sin respuesta
45	Juan Carlos Mora García INE/JDE08/VE/0220/2018 ¹⁰³	Cédula: 28 de marzo de 2018. Plazo: 29 de marzo al 04 de abril de 2018.	Sin respuesta
46	Gilberta Casilda Vázquez Álvarez INE-04JDE-GRO/VE/0286/2018 ¹⁰⁴	Cédula: 22 de marzo de 2018. Plazo: 23 al 29 de marzo de 2018.	28/03/2018 105
47	Elena Orta Flores INE-UT/3515/2018 ¹⁰⁶	Cédula: 21 de marzo de 2018. Plazo: 22 al 28 de marzo de 2018.	Sin respuesta
48	María Yanelly Palmas Íñiguez INE/JDE01-ZAC/0648/2018 ¹⁰⁷	Cédula: 21 de marzo de 2018. Plazo: 22 al 28 de marzo de 2018.	Sin respuesta

⁹² Visible a página 2176 del expediente.

⁹³ Visible a página 2184 del expediente.

⁹⁴ Visible a página 2148 del expediente.

⁹⁵ Visible a página 2009 del expediente.

⁹⁶ Visible a página 1872 del expediente.

⁹⁷ Visible a página 2027 del expediente.

⁹⁸ Visible a página 2015 del expediente.

⁹⁹ Visible a página 2113 del expediente.

¹⁰⁰ Visible a página 1926 del expediente.

¹⁰¹ Visible a página 1927 del expediente.

¹⁰² Visible a página 2032 del expediente.

¹⁰³ Visible a página 2423 del expediente.

¹⁰⁴ Visible a página 2454 del expediente.

¹⁰⁵ Visible a página 2141 del expediente.

¹⁰⁶ Visible a página 1804 del expediente.

¹⁰⁷ Visible a página 2397 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Quejosos-Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
49	Leonel Efrén Luque González INE/JDE02/BCS/VS/045/18 ¹⁰⁸	Cédula: 21 de marzo de 2018. Plazo: 22 al 28 de marzo de 2018.	Sin respuesta
50	Rosario Gómez Ruiz INE/JDE02/BCS/VS/046/18 ¹⁰⁹	Estrados: 21 de marzo de 2018. Plazo: 22 al 28 de marzo de 2018.	Sin respuesta
51	Ma. Guadalupe García Llamas INE-JAL-JDE07-VS-0429-2018 ¹¹⁰	Cédula: 23 de marzo de 2018. Plazo: 26 al 30 de marzo de 2018.	Sin respuesta
52	Aurora Reyes Mejía INE/04JDE/VS/1152/2018 ¹¹¹	Cédula: 23 de marzo de 2018. Plazo: 26 al 30 de marzo de 2018.	Sin respuesta
54	Rigoberto Segura Solís INE/JDE03/VE/0173/2018 ¹¹²	Cédula: 21 de marzo de 2018. Plazo: 22 al 28 de marzo de 2018.	Sin respuesta
55	Rogelio Díaz Saavedra INE/JDE07-HGO/VS/801/2018 ¹¹³	Estrados: 22 de marzo de 2018 Plazo: 23 al 29 de marzo de 2018.	Sin respuesta
56	Elvia de la Cruz Acosta INE/JDE03/TAB/VS/0182/2018 ¹¹⁴	Cédula: 26 de marzo de 2018. Plazo: 27 de marzo al 02 de abril de 2018.	Sin respuesta
57	María del Rosario Román Antúnez INE/02JDE/VE/0353/2018 ¹¹⁵	Cédula: 22 de marzo de 2018. Plazo: 23 al 29 de marzo de 2018.	Sin respuesta
58	Jaqueline Alfaro Jiménez INE-UT/3516/2018 ¹¹⁶	Plazo: 22 al 28 de marzo de 2018. Estrados: 21 de marzo de 2018.	Sin respuesta
59	Ma. Anita Gutiérrez Rodríguez INE/COL/JDE02/623/2018 ¹¹⁷	Cédula: 22 de marzo de 2018. Plazo: 23 al 29 de marzo de 2018.	Sin respuesta
60	Samuel Evaristo Tapia Rubio INE/COL/JDE02/624/2018 ¹¹⁸	Cédula: 22 de marzo de 2018. Plazo: 23 al 29 de marzo de 2018.	Sin respuesta
61	Perla Azenet García Garza INE/JDE04/VS/NL/0277/2018 ¹¹⁹	Cédula: 22 de marzo de 2018. Plazo: 23 al 29 de marzo de 2018.	23/03/2018 120
62	Graciela Marina Rivera Zamudio INE/JD08-VER/0725/2018 ¹²¹	Citatorio: 22 de marzo de 2018. Cédula: 23 de marzo de 2018. Plazo: 26 al 30 de marzo de 2018.	Sin respuesta
63	Dionisio Fernández Hernández INE/JD08-VER/0726/2018 ¹²²	Cédula: 23 de marzo de 2018. Plazo: 26 al 30 de marzo de 2018.	Sin respuesta
64	Alicia Sánchez Flores INE/JDE01/NL/281/2018 ¹²³	Cédula: 22 de marzo de 2018. Plazo: 23 al 29 de marzo de 2018.	Sin respuesta

¹⁰⁸ Visible a página 2381 del expediente.

¹⁰⁹ Visible a página 2384 del expediente.

¹¹⁰ Visible a página 2334 del expediente.

¹¹¹ Visible a página 2403 del expediente.

¹¹² Visible a página 2037 del expediente.

¹¹³ Visible a página 2125 del expediente.

¹¹⁴ Visible a página 2310 del expediente.

¹¹⁵ Visible a página 1884 del expediente.

¹¹⁶ Visible a páginas 1838-1839 del expediente.

¹¹⁷ Visible a página 2454 del expediente.

¹¹⁸ Visible a página 2237 del expediente.

¹¹⁹ Visible a página 1942 del expediente.

¹²⁰ Visible a página 1944 del expediente.

¹²¹ Visible a página 2069 del expediente.

¹²² Visible a página 2079 del expediente.

¹²³ Visible a página 1949 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Quejosos–Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
65	María Natividad Ruiz Meza INE/JDE03/VS/0675/2018 ¹²⁴	Cédula: 21 de marzo de 2018. Plazo: 22 al 28 de marzo de 2018.	Sin respuesta
66	Martín Dueñas Ortiz INE/BCS/JDE01/VE/275/2018 ¹²⁵	Cédula: 22 de marzo de 2018. Plazo: 23 al 29 de marzo de 2018.	Sin respuesta
67	Baldomero Cota Montañó INE/BCS/JDE01/VE/276/2018 ¹²⁶	Cédula: 26 de marzo de 2018. Plazo: 27 de marzo al 02 de abril de 2018.	Sin respuesta
68	Erika Susana González Franco INE/DGO/JD04/VS/0249/2018 ¹²⁷	Cédula: 21 de marzo de 2018. Plazo: 22 al 28 de marzo de 2018.	Sin respuesta
69	Nora Graciela Reveles Castañeda INE/DGO/JD04/VS/0250/2018 ¹²⁸	Cédula: 21 de marzo de 2018. Plazo: 22 al 28 de marzo de 2018.	Sin respuesta
70	María Elena Galván Álvarez INE/COL/JDE01/0349/2018 ¹²⁹	Citatorio: 21 de marzo de 2018. Cédula: 22 de marzo de 2018. Plazo: 23 al 29 de marzo de 2018.	Sin respuesta
71	Rosa Ícela Bustamante Coronel INE/04JDE-SON/VS/0408/2018 ¹³⁰	Estrados: 21 de marzo de 2018 Plazo: 22 al 28 de marzo de 2018.	Sin respuesta
72	Mónica Damiana Leyva Buitimea INE/04JDE-SON/VS/0409/2018 ¹³¹	Estrados: 21 de marzo de 2018 Plazo: 22 al 28 de marzo de 2018.	Sin respuesta
73	Raquel Salazar Flores INE/02JDE/VE/0354/2018 ¹³²	Cédula: 22 de marzo de 2018. Plazo: 23 al 29 de marzo de 2018.	Sin respuesta
74	Juan Carlos Meza Viveros INE/02JDE/VE/0355/2018 ¹³³	Cédula: 22 de marzo de 2018. Plazo: 23 al 29 de marzo de 2018.	Sin respuesta
75	Jorge Alfredo López Manzanares INE/JDE01TAB/VS1103/18 ¹³⁴	Cédula: 22 de marzo de 2018. Plazo: 23 al 29 de marzo de 2018.	Sin respuesta
76	Guadalupe Alejandra Fregoso INE/COL/JDE02/625/2018 ¹³⁵	Cédula: 22 de marzo de 2018. Plazo: 23 al 29 de marzo de 2018.	Sin respuesta
77	Juan Antonio Meléndez Hernández INE/JDE07-TAM/VE/0938/2018 ¹³⁶	Cédula: 21 de marzo de 2018. Plazo: 22 al 28 de marzo de 2018.	28/03/2018 137
78	Julio Iván Medina Martínez INE/COL/JDE02/626/2018 ¹³⁸	Citatorio: 23 de marzo de 2018. Estrados: 26 de marzo de 2018 Plazo: 27 de marzo al 03 de abril de 2018.	Sin respuesta
79	Mikhail Tolentino Jiménez INE/JDE05TAB/1214/2018 ¹³⁹	Cédula: 09 de abril de 2018. Plazo: 10 al 16 de abril de 2018.	Sin respuesta

¹²⁴ Visible a página 2390 del expediente.

¹²⁵ Visible a página 2369 del expediente.

¹²⁶ Visible a página 2375 del expediente.

¹²⁷ Visible a página 2138 del expediente.

¹²⁸ Visible a página 2135 del expediente.

¹²⁹ Visible a página 1998 del expediente.

¹³⁰ Visible a página 2289 del expediente.

¹³¹ Visible a página 2282 del expediente.

¹³² Visible a página 1882 del expediente.

¹³³ Visible a página 1880 del expediente.

¹³⁴ Visible a página 2304 del expediente.

¹³⁵ Visible a página 2254 del expediente.

¹³⁶ Visible a página 2227 del expediente.

¹³⁷ Visible a páginas 2053-2054 del expediente.

¹³⁸ Visible a página 2240 del expediente.

¹³⁹ Visible a página 2317 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Quejosos–Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
80	Josefina Jiménez Jiménez INE/JDE05TAB/1215/2018 ¹⁴⁰	Cédula: 09 de abril de 2018. Plazo: 10 al 16 de abril de 2018.	Sin respuesta
81	Cristóbal Hernández Mercado INE/02JDE-SON/VS/1115/2018 ¹⁴¹	Cédula: 21 de marzo de 2018. Plazo: 22 al 28 de marzo de 2018.	Sin respuesta
83	Beatriz Hernández Bello INE/JDE-02/VE/572/2018 ¹⁴²	Cédula: 22 de marzo de 2018. Plazo: 23 al 29 de marzo de 2018.	Sin respuesta
84	Víctor Manuel Álvarez Martínez INE/JD02-VER/1207/2018 ¹⁴³	Cédula: 22 de marzo de 2018. Plazo: 23 al 29 de marzo de 2018.	Sin respuesta
85	María Guadalupe Oliva Fernández INE/TAM/02JDE/0514/2018 ¹⁴⁴	Cédula: 23 de marzo de 2018. Plazo: 26 al 30 de marzo de 2018.	24/03/2018 ¹⁴⁵
86	Verónica Tenorio González INE/JDE08/VE/0221/2018 ¹⁴⁶	Cédula: 22 de marzo de 2018. Plazo: 23 al 29 de marzo de 2018.	Sin respuesta
87	Beatriz Chávez Flores INE/MICH/JDE04-VS/192/2018 ¹⁴⁷	Cédula: 21 de marzo de 2018. Plazo: 22 al 28 de marzo de 2018.	28-03- 2018 ¹⁴⁸
88	Zacarías Victoriano Chino INE/JDE08/VE/0222/2018 ¹⁴⁹	Cédula: 04 de abril de 2018. Plazo: 05 al 11 de abril de 2018.	Sin respuesta
89	Víctor Manuel Sánchez Rodríguez INE/JDE03/VE/0173/2018 ¹⁵⁰	Cédula: 21 de marzo de 2018. Plazo: 22 al 28 de marzo de 2018.	Sin respuesta
90	Cirenia Segundo Barrios JDE03-MEX/VS/126/2018 ¹⁵¹	Cédula: 21 de marzo de 2018. Plazo: 22 al 28 de marzo de 2018.	Sin respuesta
91	Juan Carlos Santana Sánchez JDE03-MEX/VS/125/2018 ¹⁵²	Cédula: 21 de marzo de 2018. Plazo: 22 al 28 de marzo de 2018.	28/03/2018 ¹⁵³

Es importante precisar que el *PT* proporcionó copia certificada¹⁵⁴ de diversa documentación con el objeto de acreditar la debida afiliación de los ciudadanos denunciantes, tales como copia certificada de cédula de afiliación, escrito de reconocimiento de afiliación y/o credencial de afiliado al *PT*, razón por la cual la

¹⁴⁰ Visible a página 2321 del expediente.

¹⁴¹ Visible a página 2277 del expediente.

¹⁴² Visible a página 2119 del expediente.

¹⁴³ Visible a página 2086 del expediente.

¹⁴⁴ Visible a página 2206 del expediente.

¹⁴⁵ Visible a página 2230 del expediente.

¹⁴⁶ Visible a página 2420 del expediente.

¹⁴⁷ Visible a página 1774 del expediente.

¹⁴⁸ Visible a página 1929 del expediente.

¹⁴⁹ Visible a página 2417 del expediente.

¹⁵⁰ Visible a página 2042 del expediente.

¹⁵¹ Visible a página 1892 del expediente.

¹⁵² Visible a página 1895 del expediente.

¹⁵³ Visible a página 1979 del expediente.

¹⁵⁴ Mediante acuerdo de quince de agosto de dos mil dieciocho, notificado el diecisiete siguiente, a través del oficio INE-UT/12635/2018, se determinó requerir al *PT*, se sirviera proporcionar el formato original de afiliación y escritos originales de renuncia a la militancia presentada por los ciudadanos Rosa Argentina Guadarrama Rosales, Jesús Alberto Meraz Navarrete, María Guadalupe Vargas Durán y Juan Arroyo Mendoza. El instituto político denunciado, por medio del oficio REP-PT-INE-PVG-408/2018, proporcionó la documentación requerida en copia certificada por el Secretario Técnico de la Comisión Ejecutiva Nacional de ese partido.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

autoridad instructora determinó en el acuerdo de alegatos correr traslado con dichas constancias a cada uno de ellos, siendo estos los que se indican a continuación:

Ciudadano
1. Dionisio Fernández Hernández
3. Samuel Evaristo Tapia Rubio
5. Graciela Marina Rivera Zamudio
7. Mikhail Tolentino Jiménez
9. Erika Jiménez Rueda
11. Araceli Jiménez Díaz
13. Jovana Berenice Castañeda Báez
15. Ariana María Domínguez Ceniceros
17. Aurora Reyes Mejía
19. Adriana Pérez Gómez
21. Elvia de la Cruz Acosta
23. Juan Antonio Meléndez Hernández
25. Elena Ramírez Guerrero
27. Eduardo Gutiérrez Ríos
29. Claudia Yuridia Terrazas
31. Elena Orta Flores
33. Miriam Ortiz Chamorro
35. Juan Gabriel Ramírez Sosa
37. Irais Jacqueline Gálvez Botello
39. Carlos Eduardo Alemán Leal
41. Richard Wilder Zenteno Grajales
43. Víctor Manuel Álvarez Martínez
45. Humbetto Guillén Tamayo
47. Jesús Alberto Meráz Navarrete
49. María Guadalupe Vargas Durán
51. Víctor Ignacio González Legarda
53. Víctor Manuel Sánchez Rodríguez
55. Oliver Juamat Gómez León

Ciudadano
2. Julio Iván Medina Martínez
4. Ma. Elena Galván Álvarez
6. María Yanelly Palmas Íñiguez
8. Jorge Alfredo López Manzanares
10. Brandon Hernández Vázquez
12. María de Jesús Huerta González
14. Alicia Sánchez Flores
16. Alma Gabriela Ríos Sánchez
18. Josefina Jiménez Jiménez
20. Verónica Zaleta Chávez
22. Zacarías Victoriano Chino
24. Irma Rodríguez Maldonado
26. Francisca Evelia Ocampo Nava
28. Perla Azenet García Garza
30. Jaqueline Alfaro Jiménez
32. Juan Carlos Mora García
34. Elvira Fernández Cornejo
36. Rosa Elena González Alemán
38. Gilberta Casilda Vázquez Álvarez
40. Nubia Selene Alejo Pascacio
42. María Guadalupe Oliva Fernández
44. Alejandra García Hernández
46. Rosa Argentina Guadarrama Rosales
48. Georgina Edith López Sosa
50. Beatriz Chávez Flores
52. Juan Arroyo Mendoza
54. Yessica Bárcenas Benítez
56. Diana García Mejía

V. Escisión de quejas. Mediante acuerdo de ocho de mayo de dos mil dieciocho, se determinó la escisión de las quejas presentadas por Eduardo Gutiérrez Ríos, Irma Rodríguez Maldonado y Juan Gabriel Ramírez Sosa, en razón de que los mismos contravirtieron las firmas asentadas en los formatos de afiliación proporcionados por el *PT*.

En tal virtud, a fin de no posponer la resolución del presente asunto, derivado de la posible realización de mayores diligencias por cuanto hace a los sujetos antes indicados, se determinó integrarlos al procedimiento sancionador ordinario con

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

clave **UT/SCG/Q/JGRS/CG/130/2018**, el cual concentra casos de similares características con el fin de investigar, sustanciar, y resolver en un solo expediente, tales motivos de disenso.

VI. Elaboración de proyecto. En su oportunidad, toda vez que no había diligencias pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la Comisión de Quejas y Denuncias.

VII. Sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias. En la octogésima cuarta Sesión Extraordinaria urgente de carácter privado, celebrada el seis de septiembre de dos mil dieciocho, la Comisión de Quejas, aprobó el proyecto por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, presentes en la sesión.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos

personales, por parte del *PT*, en perjuicio de los ciudadanos que han sido señalados a lo largo de la presente determinación.

Ahora bien, conforme al artículo 23 del *COFIPE*, los partidos políticos ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en el citado Código, correspondiendo al Instituto Federal Electoral —hoy INE— vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n); y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho Código, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38 del dispositivo legal en cita, las cuales son sancionables por el *Consejo General*.

Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443 párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la *LGIPE* y 25 de la *LGPP*, respectivamente.

En consecuencia, siendo atribución del *Consejo General* conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta competente para conocer y resolver respecto de las presuntas infracciones denunciadas en el procedimiento sancionador ordinario, atribuidas al *PT*, derivado, esencialmente, de la afiliación indebida al citado instituto político.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,¹⁵⁵ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.

¹⁵⁵ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de ciudadanos.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIPE* —los cuales contienen reglas que ya se encontraban previstas en el *COFIPE*, en los artículos 342, párrafo 1, incisos a); 356, 361, 364, 365 y 366—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO

En el presente asunto se debe subrayar que las presuntas faltas (afiliación indebida) se cometieron **durante la vigencia del *COFIPE***, puesto que en la mayoría de los casos (con excepción de sesenta y dos) el registro o afiliación de los quejosos al *PT* se realizó antes del treinta y uno de marzo de dos mil catorce, fecha en la cual se encontraba vigente dicho código.

En efecto, de conformidad con lo establecido en el Punto cuarto de los *Lineamientos para la Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su registro*, aprobados por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG617/2012, de treinta de agosto de dos mil doce, los Partidos Políticos Nacionales debían capturar en el *Sistema de Cómputo desarrollado por la Unidad Técnica de Servicios de Informática*, los datos de todos sus afiliados en el periodo comprendido **entre el uno de abril de dos mil trece y el treinta y uno de marzo de dos mil catorce**, siendo que el registro

realizado en ese periodo corresponden las más recientes fechas de alta de los quejosos en el *PT*.

Por tanto, si al momento de la comisión de las presuntas faltas se encontraba vigente el *COFIPE*,¹⁵⁶ es claro que este ordenamiento legal debe aplicarse para las cuestiones sustantivas del presente procedimiento, al margen que las faltas pudieran haber sido advertidas por los quejosos y cuestionadas mediante las quejas que dieron origen al presente asunto, una vez que dicha norma fue abrogada por la *LGIPE*, así como que este último ordenamiento sea fundamento para cuestiones procesales o adjetivas.

No obstante, para los casos correspondientes a los ciudadanos Adriana Pérez Gómez, Karina Rosales Melquiades, Francisca Evelia Ocampo Nava, José Francisco Obregón Martínez, Verónica Zaleta Chávez, José Refugio Tagle Payán, Claudia Yuridia Terrazas Abarca, Alejandra García Hernández, Oliver Juamat Gómez León, Erika Jiménez Rueda, Georgina Edith López Sosa, Diana García Mejía, Víctor Ignacio González Legarda, Rosa Elena González Alemán, Elena Orta Flores, María Yanelly Palmas Íñiguez, Rosario Gómez Ruiz, Ma. Guadalupe García Llamas, Aurora Reyes Mejía, Irma Rodríguez Maldonado, Jaqueline Alfaro Jiménez, Ma. Anita Gutiérrez Rodríguez, Dionisio Fernández Hernández, Nora Graciela Reveles Castañeda, Cristóbal Hernández Mercado, Juan Gabriel Ramírez Sosa, María Guadalupe Oliva Fernández y Zacarías Victoriano Chino, la normatividad aplicable será la *LGIPE*, toda vez que sus afiliaciones se realizaron durante la vigencia de este cuerpo normativo.

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO

1. LITIS

En el presente asunto se debe determinar si el *PT* afilió indebidamente o no a los ciudadanos que alegan no haber dado su consentimiento para estar en sus filas, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo

¹⁵⁶ El COFIPE estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce

1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en los diversos dispositivos 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*.

2. MARCO NORMATIVO

A) Constitución, tratados internacionales y ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

“Artículo 6

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

...

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.”

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la *Constitución*, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto

en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 de la *Constitución*— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia **24/2002**, emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES**.¹⁵⁷

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,¹⁵⁸ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos

¹⁵⁷ Consultable en la página del *Tribunal Electoral* o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

¹⁵⁸ Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes —asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación

política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

“Artículo 23. Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:

I...

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.”

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales publicada el treinta de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, inciso a) que era un requisito para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos

Electoral previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que, en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;
- Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
- Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGIFE*, que es obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su constitución y registro.

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.
- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que, en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la *Constitución* y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los documentos necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión

de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna del *PT*

A efecto de tener claridad acerca del proceso que un ciudadano debe llevar a cabo para convertirse en militante del *PT*, se hace necesario analizar su norma interna, para lo cual, enseguida se transcribe la parte conducente de su Estatuto consiste precisamente en el incumplimiento de sus propias normas de afiliación.¹⁵⁹

“Artículo 14.- Son militantes del Partido del Trabajo, los mexicanos, mujeres y hombres, que acepten y suscriban los Documentos Básicos y sus políticas específicas. Deberán participar activa y permanentemente en una instancia del Partido del Trabajo y en una organización social y sus luchas. Deberán aplicar las líneas políticas del Partido, actuar con honestidad y disciplina y pugnar por conservar su unidad. Por tratarse de un Instituto Político Nacional, en el cual sus militantes, afiliados y simpatizantes participan en forma personal y voluntaria, además que el ejercicio de sus actividades políticas se encuentran consideradas en el Artículo 35 Constitucional, como prerrogativas de los ciudadanos; en consecuencia, en ningún momento la militancia de los mismos en el Partido del Trabajo, generará derechos laborales.

...

Artículo 17.- Son afiliados al Partido del Trabajo los mexicanos mujeres y hombres que acepten la Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos y colaboren con algunas tareas del partido, especialmente electorales...

...

Artículo 22.- Los requisitos de ingreso de afiliados al Partido del Trabajo son:

...

d) Presentar una solicitud de afiliación por escrito, a la instancia partidaria correspondiente.

e) Presentar una solicitud de ingreso de manera individual, libre y voluntaria ante la Comisión Ejecutiva Municipal, Delegacional, Estatal, del Distrito Federal y Nacional en su caso.

f) Cubiertos los requisitos, el Partido del Trabajo podrá aceptar la solicitud de ingreso y emitir la constancia de afiliación.

...

¹⁵⁹ Consultable en el portal oficial del *PT* o bien en la página electrónica: <http://www.partidodeltrabajo.org.mx/estatutos.php#iv>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

Artículo 134. Los militantes y afiliados tienen plenamente garantizado el acceder a la información partidaria que no se encuentre clasificada como reservada o confidencial; será puesta a disposición mediante solicitud escrita en la cual se establezca el nombre del solicitante, el carácter de militante, afiliado o simpatizante, el domicilio para recibir notificaciones, la descripción clara y precisa de la información que solicita, y la forma en la cual prefiera le sea entregada, ya sea verbalmente, mediante copias certificadas, o si se tuviere, en medio magnético. Los militantes y afiliados en ejercicio del derecho a la información, tendrán como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra, la estimación, los ataques a la moral, a los derechos de terceros o que pudiesen provocar algún delito. Se considerará información clasificada como reservada o confidencial:

I.- La que determine la Comisión Ejecutiva Nacional con base en los siguientes criterios:

...

d) La información referente a los datos personales de los militantes o afiliados, así como de los candidatos del Partido, será considerada como confidencial.”

De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente:

- El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, fundamentalmente, en la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para decidir **libre e individualmente** si desean formar parte de los partidos y agrupaciones políticas.
- Afiliado o militante es el ciudadano que libre, voluntaria e individualmente, acude a un partido político para solicitar su incorporación al padrón de militantes respectivo, a través de los documentos aprobados por los órganos partidistas correspondientes.
- Al *PT* podrán afiliarse los ciudadanos que, libre e individualmente, expresen su voluntad de integrarse al partido.
- Uno de los requisitos formales para afiliarse al PT, consiste en presentar una solicitud de afiliación por escrito, a la instancia partidista correspondiente.
- Para obtener la afiliación al partido de referencia, se requiere, además de ser ciudadano mexicano y expresar **su voluntad libre, individual y pacífica de afiliarse** al Partido, **suscribir personalmente** la solicitud de alta como militante.

- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- En términos de lo previsto en el artículo 16, párrafo segundo de la Constitución, toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán contemplar en sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos.

D) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la *Constitución*, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

3. CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE AFILIACIÓN INDEBIDA A UN PARTIDO POLÍTICO

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante del *PT*, por regla general debe acudir a las instancias partidistas competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso el *PT*), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del *COFIPE*, precepto que, derivado de la reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la *LGPP*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que además los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y voluntaria.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la *Sala Superior*, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**,¹⁶⁰ donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia 21/2013, de rubro **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS**

¹⁶⁰ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES,¹⁶¹ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria¹⁶² y como estándar probatorio.¹⁶³

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación¹⁶⁴ ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la *Sala Superior* consideró en la sentencia referida, que, para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

¹⁶¹ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.

¹⁶² Tesis de Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

¹⁶³ Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. Véase la nota 35.

¹⁶⁴ Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA, CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO**.

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con fundamento en el diverso 441 de la *LGIFE*, lo que implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento ordinario sancionador una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberadamente la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

4. HECHOS ACREDITADOS Y PRECISIONES

Como se ha mencionado, las denuncias presentadas por los quejosos, versan sobre la supuesta violación a su derecho de libertad de afiliación, al ser incorporados al padrón del *PT*, sin su consentimiento, así como la utilización de sus datos personales por dicho partido político para sustentar tal afiliación.

Ahora bien, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de la infracción denunciada, en los siguientes cuadros se resumirá, por cada uno de los denunciantes, la información derivada de la investigación preliminar implementada, así como las conclusiones que, en cada caso, fueron advertidas:

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político¹⁶⁵
1	Carlos Eduardo Alemán Leal	13/11/2017 ¹⁶⁶	Estatus actual: Afiliado Alta 13/03/2014	Estatus actual: Afiliado. Afiliado 13/03/2014 Oficio REP-PT-INE-PVG-156/2017. ¹⁶⁷ Remitió copia

¹⁶⁵ Los oficios y escritos de respuesta del *PT* que a continuación se enlistan son signados por el representante propietario del *PT* ante el *Consejo General*, lo cual se tiene por reproducido como si a la letra se insertasen a fin de evitar repeticiones innecesarias.

¹⁶⁶ Visible a página 3 del expediente.

¹⁶⁷ Visible a páginas 55-56 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político ¹⁶⁵
				certificada ¹⁶⁸ del formato de afiliación del quejoso. ¹⁶⁹
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, no existe controversia en el sentido de que el denunciante está afiliado al <i>PT</i>.</p> <p>El <i>PT</i> aportó copia certificada de cédula de afiliación del ciudadano, sin que esta haya sido objetada o controvertida por el quejoso, al no dar contestación a la vista que le fue formulada con las constancias atinentes, sobre la cual no se pronunció.</p> <p>En consecuencia, la conclusión debe ser que NO se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
2	Elizabeth Jiménez Avellaneda	21/11/2017 ¹⁷⁰	Estatus actual: No afiliada Alta 28/01/2014 Cancelación 21/11/2017	Estatus actual: Afiliado. Oficio REP-PT-INE-PVG-156/2017 ¹⁷¹ y escrito de 29/01/2018. ¹⁷² Informó que no ha sido posible encontrar documentales respecto a la denunciante.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del <i>PT</i>. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>				

¹⁶⁸ Los documentos aportados por el *PT* están certificados por Silvano Garay Ulloa, Secretario Técnico de la Comisión Ejecutiva Nacional del *PT*, quien en términos de lo previsto en los artículos 37 y 37 BIS I, incisos c) y d) del Estatuto vigente de ese instituto político. **“Artículo 37 Bis 1.** La Comisión Ejecutiva Nacional designará, un Secretario Técnico que tendrá las siguientes funciones: ... c) Certificar las actas y acuerdos de la Comisión Ejecutiva Nacional y de la Comisión Coordinadora Nacional cuando así se requiera. d) Certificar todos los documentos del Partido del Trabajo cuando así se requiera.” Consulta disponible en la dirección electrónica: <http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEPPP/DEPPP-DocumentosBasicos/DEPPP-DocumentosBasicos-pdfs/PT/ESTATUTOSPT.pdf>

¹⁶⁹ Visible a página 58 del expediente.

¹⁷⁰ Visible a página 16 del expediente.

¹⁷¹ Visible a páginas 55-56 del expediente.

¹⁷² Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
3	Adriana Pérez Gómez	23/11/2017 ¹⁷³	Estatus actual: Afiliada Alta 27/08/2014	Estatus actual: Afiliado. Afiliada en 2014 Oficio REP-PT-INE-PVG-156/2017. ¹⁷⁴ Remitió copia certificada de formato de afiliación. ¹⁷⁵
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, no existe controversia en el sentido de que la denunciante está afiliada al PT.</p> <p>El PT aportó copia certificada de cédula de afiliación de la ciudadana, sin que esta haya sido objetada o controvertida por la quejosa, al no dar contestación a la vista que le fue formulada con las constancias atinentes, sobre la cual no se pronunció.</p> <p>En consecuencia, la conclusión debe ser que NO se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
4	Jovana Berenice Castañeda Báez	21/02/2018 ¹⁷⁶	Estatus actual: No afiliada Alta 29/11/2011 Cancelación 16/10/2017	Estatus actual: No afiliado. Afiliada en 2011 Oficio REP-PT-INE-PVG-156/2017. ¹⁷⁷ Informó que no se encuentra en su padrón de afiliados, remitiendo copia certificada de tres escritos emitidos por el PT: 1. Solicitud interna de baja de la ciudadana del padrón de afiliados, 2. Manifestando que se procesó la solicitud de baja y 3. Escrito de 18 de octubre de 2017, dirigido a la denunciante informándole que ya no se encuentra afiliada. ¹⁷⁸
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado</p>				

¹⁷³ Visible a página 25 del expediente.

¹⁷⁴ Visible a páginas 55-56 del expediente.

¹⁷⁵ Visible a página 59 del expediente.

¹⁷⁶ Visible a página 1658 del expediente.

¹⁷⁷ Visible a páginas 55-56 del expediente.

¹⁷⁸ Visible a páginas 61-64 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
<p>instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Además, si bien el PT aportó documentales para, a su parecer, acreditar la afiliación, lo cierto es que se trata de documentos internos emitidos por dicho partido político, en los que, en ninguno de ellos, se aprecia la voluntad de la denunciante de pertenecer al partido, por ende, no son suficientes para acreditar una debida afiliación.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
5	Flor Alicia Duarte Aguilar	03/11/2017 ¹⁷⁹	Estatus actual: Afiliada Alta 11/12/2013	Estatus actual: Afiliado. Oficio REP-PT-INE-PVG-156/2017 ¹⁸⁰ y escrito de 29/01/2018. ¹⁸¹ Informó que no ha sido posible encontrar documentales respecto a la denunciante.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
7	Karina Rosales Melquiades	04/12/2017 ¹⁸²	Estatus actual: No afiliada Alta 25/06/2014 Cancelación 04/12/2017	Estatus actual: No afiliado. Oficio REP-PT-INE-PVG-159/2017. ¹⁸³ Informó que el registro de esa ciudadana se encuentra como cancelado.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>Aun cuando el PT niega que, a la fecha, la ciudadana esté afiliada a dicho partido político, lo cierto es que se detectó su registro como militante, sin que el PT aportara las respectivas documentales o medios de</p>				

¹⁷⁹ Visible a página 6 del expediente.

¹⁸⁰ Visible a páginas 55-56 del expediente.

¹⁸¹ Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

¹⁸² Visible a página 72 del expediente.

¹⁸³ Visible a páginas 230-231 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
<p>prueba que demostraran que en algún momento, la ciudadana manifestó su voluntad de afiliarse, ello con independencia que su estatus aparezca actualmente como cancelado, habida cuenta que está demostrado que en un momento determinado, la hoy quejosa perteneció al partido y éste no pudo demostrar que lo hizo de forma voluntaria.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
8	Juan Carlos Salcido Álvarez	04/12/2017 ¹⁸⁴	Estatus actual: Afiliado Alta 27/07/2011	Estatus actual: Afiliado. 2011 Oficio REP-PT-INE-PVG-159/2017. ¹⁸⁵ Informó que no ha sido posible encontrar documentales respecto al denunciante.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que el denunciante es militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
9	Amada Dávalos Candelario	02/12/2017 ¹⁸⁶	Estatus actual: No afiliada Alta 02/04/2009 Cancelación 11/12/2017	Estatus actual: No afiliado. Oficio REP-PT-INE-PVG-159/2017. ¹⁸⁷ Informó que la ciudadana no se encuentra afiliada al partido.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>Aun cuando el PT niega que la ciudadana estuviera afiliada a dicho partido político, lo cierto es que se detectó su registro como militante del mismo, sin que el PT aportara las respectivas documentales o medios de prueba que demostraran que, en algún momento, la ciudadana manifestó su voluntad de afiliarse, ello con independencia que su estatus aparezca actualmente como cancelado, habida cuenta que está demostrado</p>				

¹⁸⁴ Visible a página 79 del expediente.

¹⁸⁵ Visible a páginas 230-231 del expediente.

¹⁸⁶ Visible a página 85 del expediente.

¹⁸⁷ Visible a páginas 230-231 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
que en un momento determinado, la hoy quejosa perteneció al partido y éste no pudo demostrar que lo hizo de forma voluntaria.				
Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida .				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
10	Francisca Evelia Ocampo Nava	08/12/2017 ¹⁸⁸	Estatus actual: Afiliada 30/06/2014	Estatus actual: Afiliado. 2014 Oficio REP-PT-INE-PVG-159/2017. ¹⁸⁹ Remitió copia certificada de formato de afiliación. ¹⁹⁰
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, no existe controversia en el sentido de que la denunciante está afiliada al <i>PT</i>.</p> <p>El PT aportó copia certificada de cédula de afiliación de la ciudadana, sin que esta haya sido objetada o controvertida por la quejosa, al no dar contestación a la vista que le fue formulada con las constancias atinentes, sobre la cual no se pronunció.</p> <p>En consecuencia, la conclusión debe ser que NO se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
11	José Francisco Obregón Martínez	04/12/2017 ¹⁹¹	Estatus actual: No afiliado Alta 28/10/2014 Cancelación 13/12/2017	Estatus actual: No afiliado. Oficio REP-PT-INE-PVG-159/2017. ¹⁹² Informó que el registro de ese ciudadano se encuentra como cancelado.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>Aun cuando el PT manifestó que el registro del ciudadano fue cancelado, lo cierto es que se detectó su registro como militante del mismo, sin que el PT aportara las respectivas documentales o medios de prueba que demostraran que en algún momento, el ciudadano manifestó su voluntad de afiliarse, ello con</p>				

¹⁸⁸ Visible a página 93 del expediente.

¹⁸⁹ Visible a páginas 230-231 del expediente.

¹⁹⁰ Visible a página 235 del expediente.

¹⁹¹ Visible a página 100 del expediente.

¹⁹² Visible a páginas 230-231 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

independencia que su estatus aparezca actualmente como cancelado, habida cuenta que está demostrado que en un momento determinado, la hoy quejosa perteneció al partido y éste no pudo demostrar que lo hizo de forma voluntaria.

Es por ello que la conclusión debe ser que **SÍ** se trata de una **afiliación indebida**.

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
12	Verónica Zaleta Chávez	06/12/2017 ¹⁹³	Estatus actual: Afiliada Alta 23/08/2014	Estatus actual: Afiliado. Afiliada en 2014 Oficio REP-PT-INE-PVG-043/2018. ¹⁹⁴ Remitió copia certificada del formato de afiliación. ¹⁹⁵

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, no existe controversia en el sentido de que la denunciante se afilió al *PT*.

El *PT* aportó copia certificada de cédula de afiliación de la ciudadana, y está al dar contestación a la vista para formular alegatos,¹⁹⁶ manifestó que *...si bien es cierto que se firmó una hoja, esta fue en blanco y fue para la adquisición de una despena*.

Con base en lo anterior, aún y cuando esta ciudadana persiste en oponerse a la debida afiliación, refiriendo al respecto las justificaciones antes señaladas, lo cierto es que no aporta algún medio de prueba que permita inferir a esta autoridad la veracidad de su dicho; amén que admite la autenticidad de la firma plasmada en el documento exhibido por el partido denunciado.

Además, cabe precisar que, al dar contestación a la vista de alegatos, la denunciante no controvertió el contenido de las documentales aportadas por el *PT*, habida cuenta que con tales constancias se le corrió traslado, a efecto de que se pronunciara al respecto en la etapa de alegatos, sin que objetara su autenticidad, así como tampoco su alcance y valor probatorio; lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de Quejas.

Con base en lo expuesto, la existencia del referido documento, no es un hecho controvertido, al cual debe concederse el valor y eficacia probatoria plena.

No pasa inadvertido que, la quejosa manifestó que se le ofreció un apoyo consistente en la entrega de una despena, sin embargo, no precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que supuestamente se llevó a cabo el hecho que hace del conocimiento de esta autoridad electoral, ni tampoco presentó algún medio de prueba para corroborar su dicho.

En consecuencia, la conclusión debe ser que **NO** se trata de una **afiliación indebida**.

¹⁹³ Visible a página 110 del expediente.

¹⁹⁴ Visible a páginas 1723-1725 del expediente.

¹⁹⁵ Visible a página 1746 del expediente.

¹⁹⁶ Visible a página 2229 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
13	Elena Ramírez Guerrero	06/12/2017 ¹⁹⁷	Estatus actual: Afiliada Alta 01/02/2014	Estatus actual: Afiliado. Afiliada en 2014 Oficio REP-PT-INE-PVG-043/2018. ¹⁹⁸ Remitió copia certificada de carta de renuncia de afiliación partidaria al PT. ¹⁹⁹

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante es afiliada al PT.

Ahora bien, obra en el presente asunto copia certificada de escrito signado²⁰⁰ por Elena Ramírez Guerrero, dirigido tanto al PT en el estado de Veracruz como al INE, en el que, esencialmente, manifestó: *Por medio del presente documento vengo a reconocer que fue mi voluntad de manera libre, sin coacción ni violencia afiliarme al Partido del Trabajo en 2014, por lo que desde este momento reconozco que si me afilie al Partido del Trabajo en el año que comento.*

Es importante destacar, que, si bien la quejosa, en la misma temporalidad, presentó tanto su escrito de queja por afiliación indebida como el escrito dirigido al PT solicitando su renuncia a dicho instituto político, se considera que debe prevalecer este último.

Lo anterior, se considera así, porque en caso de que la ciudadana efectivamente hubiera tenido una inconformidad con el partido político denunciado al haber sido registrada, según su dicho, en contra de su voluntad y de forma indebida en el padrón de militantes del PT, para lo cual, además, utilizaron indebidamente sus datos personales, debió presentar ante ese instituto político una solicitud de desafiliación, haciendo patente su desaprobación por el multicitado registro, circunstancia que no aconteció, ya que con pleno conocimiento de su afiliación firmó una carta de renuncia a la militancia, en la que reconoce su voluntad de afiliarse de forma libre y sin coacción.

El PT aportó tal documentación, sin que esta haya sido objetada o controvertida por la quejosa, al no dar contestación a la vista que le fue formulada con las constancias atinentes, sobre la cual no se pronunció.

Es por ello que la conclusión debe ser que **NO se trata de una afiliación indebida.**

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
14	Nubia Selene Alejo Pascacio	06/12/2017 ²⁰¹	Estatus actual: Afiliada Alta 20/03/2014	Estatus actual: No afiliado. Afiliada en 2014 Oficio REP-PT-INE-PVG-162/2017 ²⁰² Remitió copia certificada de la solicitud de 15 de diciembre de 2017, de la

¹⁹⁷ Visible a página 113 del expediente.

¹⁹⁸ Visible a páginas 1723-1725 del expediente.

¹⁹⁹ Visible a página 1727 del expediente.

²⁰⁰ Visible a página 1727 del expediente.

²⁰¹ Visible a página 118 del expediente.

²⁰² Visible a páginas 435-436 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
				<p>renuncia y/o afiliación al <i>PT</i>, así como la solicitud de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de datos Personales en posesión del <i>PT</i> y de la credencial de elector.²⁰³</p> <p>Oficio REP-PT-INE-PVG-165/2017.²⁰⁴ Remitió copia certificada del escrito mediante el cual le informan a la ciudadana que ha sido dada de baja del padrón de afiliados del <i>PT</i>.²⁰⁵</p>

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante es afiliada al *PT*.

Ahora bien, obra en el presente asunto copia certificada de escrito signado²⁰⁶ por Nubia Selene Alejo Pascacio, dirigido tanto al *PT* en el estado de Veracruz como al *INE*, en el que, esencialmente, manifestó: *Por medio del presente documento vengo a reconocer que fue mi voluntad de manera libre, sin coacción ni violencia afiliarme al Partido del Trabajo en 2014, por lo que desde este momento reconozco que si me afilie al Partido del Trabajo en el año que comento.*

Es importante destacar, que, si bien la quejosa, en la misma temporalidad, presentó tanto su escrito de queja por afiliación indebida como el escrito dirigido al *PT* solicitando su renuncia a dicho instituto político, se considera que debe prevalecer este último.

Lo anterior, se considera así, porque en caso de que la ciudadana efectivamente hubiera tenido una inconformidad con el partido político denunciado al haber sido registrada, según su dicho, en contra de su voluntad y de forma indebida en el padrón de militantes del *PT*, para lo cual, además, utilizaron indebidamente sus datos personales, debió presentar ante ese instituto político una solicitud de desafiliación, haciendo patente su desaprobación por el multicitado registro, circunstancia que no aconteció, ya que con pleno conocimiento de su afiliación firmó una carta de renuncia a la militancia, en la que reconoce su voluntad de afiliarse de forma libre y sin coacción.

El *PT* aportó tal documentación, sin que esta haya sido objetada o controvertida por la quejosa, al no dar contestación a la vista que le fue formulada con las constancias atinentes, sobre la cual no se pronunció.

Es por ello que la conclusión debe ser que **NO se trata de una afiliación indebida.**

²⁰³ Visible a páginas 439-445 del expediente.

²⁰⁴ Visible a páginas 542-543 del expediente.

²⁰⁵ Visible a página 546 del expediente.

²⁰⁶ Visible a página 1727 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
15	María de Jesús Huerta González	05/12/2017 ²⁰⁷	Estatus actual: No afiliada Alta 21/01/2014 Cancelación 07-12-2017	Estatus actual: No afiliado. Afiliada en 2014 Oficio REP-PT-INE-PVG-165/2017. ²⁰⁸ Informó que causó baja de su padrón de afiliados, remitió copia certificada de escrito de 1 de diciembre de 2017, en el cual se le notificó a la ciudadana la baja del referido padrón. ²⁰⁹

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.

Además, si bien el PT aportó documentales para, a su parecer, acreditar la afiliación, lo cierto es que se trata de documentos internos emitidos por dicho partido político, en los que, en ninguno de ellos, se aprecia la voluntad de la denunciante de pertenecer al partido, por ende, no son suficientes para acreditar una debida afiliación.

Es por ello que la conclusión debe ser que **SÍ** se trata de una **afiliación indebida**.

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
16	Humbetto Guillén Tamayo	04/12/2017 ²¹⁰	Estatus actual: No afiliado Alta 23/01/2008 Cancelación 06/12/2017	Estatus actual: No afiliado. Afiliado en 2017 Oficio REP-PT-INE-PVG-165/2017. ²¹¹ Remitió copia certificada de escrito de 5 de diciembre de 2017, a través del cual el denunciante solicitó la renuncia al PT, y escrito de misma fecha, por el cual le notifican al ciudadano que ha sido dado de baja del padrón de afiliados. ²¹²

²⁰⁷ Visible a página 125 del expediente.

²⁰⁸ Visible a páginas 542-543 del expediente.

²⁰⁹ Visible a páginas 545-546 del expediente.

²¹⁰ Visible a página 131 del expediente.

²¹¹ Visible a páginas 542-543 del expediente.

²¹² Visible a páginas 550-552 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que el denunciante fue afiliado al PT.</p> <p>Ahora bien, obra en el presente asunto copia certificada de escrito signado²¹³ por Humbetto Guillén Tamayo, dirigido tanto al PT en el estado de Veracruz como al INE, en el que, esencialmente, manifestó: <i>Por medio del presente documento vengo a reconocer que fue mi voluntad de manera libre, sin coacción ni violencia afiliarme al Partido del Trabajo en 2017, por lo que desde este momento reconozco que si me afilie al Partido del Trabajo en el año que comento.</i></p> <p>Es importante precisar que, si bien existe una inconsistencia en la fecha en que la DEPPP tiene de registro de Humbetto Guillén Tamayo como afiliado al PT y la que el quejoso señala en el escrito referido en el párrafo anterior, lo cierto es que, en el caso, se considera que debe prevalecer la fecha proporcionada por la autoridad electoral al ser quien cuenta con atribuciones e información sobre los registros de ciudadanos a los padrones de los institutos políticos. Además, dicha circunstancia, en el particular, es independiente, ya que lo que se analiza es la debida o afiliación indebida, lo cual no está controvertido.</p> <p>Además, si bien el quejoso, en la misma temporalidad, presentó tanto su escrito de queja por afiliación indebida como el escrito dirigido al PT solicitando su renuncia a dicho instituto político, se considera que debe prevalecer este último.</p> <p>Lo anterior, se considera así, porque en caso de que el ciudadano efectivamente hubiera tenido una inconformidad con el partido político denunciado al haber sido registrado, según su dicho, en contra de su voluntad y de forma indebida en el padrón de militantes del PT, para lo cual, además, utilizaron indebidamente sus datos personales, debió presentar ante ese instituto político una solicitud de desafiliación, haciendo patente su desaprobación por el multicitado registro, circunstancia que no aconteció, ya que con pleno conocimiento de su afiliación firmó una carta de renuncia a la militancia, en la que reconoce su voluntad de afiliarse de forma libre y sin coacción.</p> <p>El PT aportó tal documentación, sin que esta haya sido objetada o controvertida por el quejoso, al no dar contestación a la vista que le fue formulada con las constancias atinentes, sobre la cual no se pronunció.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que NO se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
17	Karla Mariela Carlón Millanes	07/12/2017 ²¹⁴	Estatus actual: Afiliada Alta 14/02/2014	Estatus actual: No afiliado. Escrito de 29/01/2018. ²¹⁵ Informó que la quejosa no existe en su padrón de afiliados.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>Aun cuando el PT niega que la ciudadana estuviera afiliada a dicho partido político, lo cierto es que se detectó su registro como militante del mismo, sin que el PT aportara las respectivas documentales o medios de prueba que demostraran que, en algún momento, la ciudadana manifestó su voluntad de afiliarse.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>				

²¹³ Visible a página 550 del expediente.

²¹⁴ Visible a página 137 del expediente.

²¹⁵ Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
18	Irais Jacqueline Gálvez Botello	11/12/2017 ²¹⁶	Estatus actual: No afiliada Alta 24/03/2017 Cancelación 11-12-2017	Estatus actual: No afiliado. Afiliada en 2017 Escrito de 29/01/2018. ²¹⁷ Informó que se dio de baja a la quejosa del padrón de afiliados, remitió copia certificada de los oficios por los cuales se solicitó la baja del dicho padrón, del escrito de desconocimiento dirigido al PT el 08/12/17, y de la credencial de elector del quejoso. ²¹⁸

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.

Además, si bien el PT aportó documentales para, a su parecer, acreditar la afiliación, lo cierto es que se trata de documentos internos emitidos por dicho partido político, en los que, en ninguno de ellos, se aprecia la voluntad de la denunciante de pertenecer al partido, por ende, no son suficientes para acreditar una debida afiliación.

Es por ello que la conclusión debe ser que **Sí** se trata de una **afiliación indebida**.

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
19	Miriam Ortiz Chamorro	05/12/2017 ²¹⁹	Estatus actual: Afiliada Alta 07/11/2013	Estatus actual: No afiliado. Afiliada en 2013 Escrito de 29/01/2018. ²²⁰ Remitió copia certificada de los oficios mediante los cuales se realizó el proceso de baja del padrón, así como el oficio de desconocimiento de afiliación. ²²¹

²¹⁶ Visible a página 142 del expediente.

²¹⁷ Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

²¹⁸ Visible a páginas 1480-1486 del expediente.

²¹⁹ Visible a páginas 146-147 del expediente.

²²⁰ Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

²²¹ Visible a páginas 1466-1471 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Además, si bien el PT aportó documentales para, a su parecer, acreditar la afiliación, lo cierto es que se trata de documentos internos emitidos por dicho partido político, en los que, en ninguno de ellos, se aprecia la voluntad de la denunciante de pertenecer al partido, por ende, no son suficientes para acreditar una debida afiliación.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
20	Alma Gabriela Ríos Sánchez	08/12/2017 ²²²	Estatus actual: Afiliada Alta 07/04/2014	Estatus actual: No afiliado. Afiliada en 2014 Escrito de 29/01/2018. ²²³ Informó que se dio de baja a la quejosa del padrón de afiliados, remitió copia certificada del escrito de desconocimiento signado por la ciudadana, así como también del escrito por el cual el PT le notifica a la quejosa que fue dada de baja del padrón en cita. ²²⁴
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Además, si bien el PT aportó documentales para, a su parecer, acreditar la afiliación, lo cierto es que se trata de documentos internos emitidos por dicho partido político, en los que, en ninguno de ellos, se aprecia la voluntad de la denunciante de pertenecer al partido, por ende, no son suficientes para acreditar una debida afiliación.</p>				

²²² Visible a páginas 163-164 del expediente.

²²³ Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

²²⁴ Visible a páginas 1501-1503 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
<p>Adicional a lo anterior, la ciudadana al desahogar la vista para formular alegatos²²⁵ manifestó, esencialmente que...<i>en ningún momento...recibió copia del... documento que cuenta con la fecha del 20 de diciembre de 2017 y que no cuenta con mi firma de recibido, además que no cuento con la credencial que mencionan ya que yo en ningún momento me he afiliado al Partido del Trabajo ni a ningún otro partido político.</i></p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
21	Mario Armando Pamas Reyna	07/11/2017 ²²⁶	Estatus actual: Afiliado Alta 09/12/2013	Estatus actual: Afiliado. Escrito de 29/01/2018. ²²⁷ Informó que no ha sido posible encontrar documentales respecto al denunciante.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
22	Anallely Hernández Hernández	07/12/2017 ²²⁸	Estatus actual: Afiliada Alta 24/02/2014	Estatus actual: Afiliado. Escrito de 29/01/2018. ²²⁹ Informó que no ha sido posible encontrar documentales respecto a la denunciante.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

²²⁵ Visible a página 1957 del expediente.

²²⁶ Visible a página 170 del expediente.

²²⁷ Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

²²⁸ Visible a páginas 176-177 del expediente.

²²⁹ Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
23	José Refugio Tagle Payán	04/12/2017 ²³⁰	Estatus actual: Afiliado Alta 21/09/2014	Estatus actual: Afiliado. Escrito de 29/01/2018. ²³¹ Informó que no ha sido posible encontrar documentales respecto al denunciante.

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.

Adicional a lo anterior, el ciudadano al desahogar la vista para formular alegatos,²³² ratificó su desconocimiento de su afiliación al *PT*, al manifestar, esencialmente, lo siguiente:

“...ratifico en todos sus puntos la queja presentada el 04 de diciembre de 2017 por afiliación indebida al Partido del Trabajo, donde manifesté bajo protesta de decir verdad, las circunstancias de modo tiempo y lugar y de cómo tuve conocimiento de la afiliación indebida, en la que manifesté que: el INE me hizo la compulsa para ver si estaba afiliado a algún partido político el día viernes 01 de diciembre de 2017, saliendo positivo esta afiliación al Partido del Trabajo, esto es ya que solicité participar en el Proceso electoral 2018 como Capacitador Electoral o Supervisor. En Virtud de lo anterior, solicité el inicio del presente procedimiento a fin de que se investigara la conducta realizada por el Partido Político, por la afiliación que desconozco. Así mismo me permito manifestar que en vista de alegatos, por la materia del procedimiento al que me dirijo, es el uso indebido de mis datos personales atribuible al Partido del Trabajo.”

Es por ello que la conclusión debe ser que **Sí** se trata de una **afiliación indebida**.

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
24	Juan Arroyo Mendoza	06/12/2017 ²³³	Estatus actual: Afiliado Alta 21/09/2008	Estatus actual: Afiliado. Oficio REP-PT-INE-PVG-162/2017. ²³⁴ Remitió copia certificada del escrito con rubro del asunto: <i>Renuncia a mi afiliación</i> , signado por el dicho ciudadano, solicitando su baja del padrón de afiliados del <i>PT</i> .

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del PT.

²³⁰ Visible a página 186 del expediente.

²³¹ Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

²³² Visible a páginas 2356-2357 del expediente

²³³ Visible a página 191 del expediente.

²³⁴ Visible a página 435-438 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

Es importante referir que si bien el citado instituto político presentó copia certificada de escrito signado por Juan Arroyo Mendoza con rubro del asunto: *Renuncia a mi afiliación*, y en el contenido del mismo se asentó: *... solicito a usted de manera más atenta me elimine del padrón de afiliados del Partido del Trabajo por decisión personal y por así convenir a mis intereses*, lo cierto es que no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva, lo cierto es que

Cabe precisar que mediante Acuerdo de quince de agosto de dos mil dieciocho, se requirió al *PT* con el objeto de que se sirviera proporcionar el formato original de afiliación y el escrito original de renuncia a la militancia presentada por el ciudadano en cita, sin embargo, dicho partido político solo presentó, de nueva cuenta, copia certificada del escrito de renuncia.

Es por ello que la conclusión debe ser que **Sí se trata de una afiliación indebida.**

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
25	Claudia Yuridia Terrazas Abarca	04/12/2017 ²³⁵	Estatus actual: Afiliada Alta 08/12/2014	Estatus actual: Afiliado. 2014 Escrito de 29/01/2018. ²³⁶ Remitió copia certificada de formato de afiliación, carta de renuncia de afiliación partidaria. ²³⁷

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, no existe controversia en el sentido de que la denunciante está afiliada al *PT*.

El *PT* aportó copia certificada de cédula de afiliación de la ciudadana de 2014.

De igual forma, el *PT* presentó copia certificada de carta de renuncia de afiliación partidaria de 25 de noviembre de 2014, en la que se asentó: *Que con esta fecha renunció a todas y cada una de las afiliaciones hechas con anterioridad a los partidos políticos existentes en México, dejando vigente a partir de esta fecha la afiliación realizada al Partido del Trabajo, por así convenir a mis intereses políticos y ciudadanos...*, sin que estas hayan sido objetadas o controvertidas por la quejosa, al no dar contestación a la vista que le fue formulada con las constancias atinentes, sobre la cual no se pronunció.

En consecuencia, la conclusión debe ser que **NO se trata de una afiliación indebida.**

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
26	Alejandra García Hernández	01/12/2017 ²³⁸	Estatus actual: Afiliada Alta 28/03/2015	Estatus actual: Afiliado. 29/03/2015

²³⁵ Visible a página 201 del expediente.

²³⁶ Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

²³⁷ Visible a páginas 1446-1448 del expediente.

²³⁸ Visible a página 210 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
				Oficio REP-PT-INE-PVG-165/2017. ²³⁹ Remitió copia certificada del formato de afiliación, de la credencial de afiliado al PT. ²⁴⁰

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, no existe controversia en el sentido de que la denunciante está afiliada al PT.

El PT aportó copia certificada de cédula de afiliación de la ciudadana, en la que, además, se aprecia la credencial de afiliada de dicho instituto político con los datos siguientes: nombre, domicilio, folio, clave de elector, firma, huella y fotografía, con fecha de emisión 29/03/2015, sin que estas hayan sido objetadas o controvertidas por la quejosa, al no dar contestación a la vista que le fue formulada con las constancias atinentes, sobre la cual no se pronunció.

En consecuencia, la conclusión debe ser que **NO se trata de una afiliación indebida.**

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
27	Brandon Hernández Vázquez	08/12/2017 ²⁴¹	Estatus actual: No afiliado Alta 13/03/2014 Cancelación 19/12/2017	Estatus actual: No afiliado. 2014 Oficio REP-PT-INE-PVG-002/2018. ²⁴² Remitió copia certificada del escrito de 15 de diciembre de 2017, mediante el cual le informan al ciudadano que fue dado de baja del padrón de afiliados. ²⁴³

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.

Además, si bien el PT aportó documentales para, a su parecer, acreditar la afiliación, lo cierto es que se trata de documentos internos emitidos por dicho partido político, en los que, en ninguno de ellos, se aprecia la voluntad del denunciante de pertenecer al partido, por ende, no son suficientes para acreditar una debida afiliación.

²³⁹ Visible a páginas 542-543 del expediente.

²⁴⁰ Visible a páginas 553-554 del expediente.

²⁴¹ Visible a página 239 del expediente.

²⁴² Visible a páginas 894-896 del expediente.

²⁴³ Visible a páginas 925-926 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida .				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
28	Richard Wilder Zenteno Grajales	13/12/2017 ²⁴⁴	Estatus actual: Afiliado Alta 12/02/2008	Estatus actual: Afiliado. Escrito de 29/01/2018. ²⁴⁵ Remitió copia certificada del formato de afiliación. ²⁴⁶
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, no existe controversia en el sentido de que el denunciante está afiliado al <i>PT</i>.</p> <p>El PT aportó copia certificada de cédula de afiliación del ciudadano, sin que esta haya sido objetada o controvertida por el quejoso, al no dar contestación a la vista que le fue formulada con las constancias atinentes, sobre la cual no se pronunció.</p> <p>En consecuencia, la conclusión debe ser que NO se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
29	Araceli Jiménez Díaz	08/12/2017 ²⁴⁷	Estatus actual: No afiliada Alta 11/11/2013 Cancelación 19/12/2017	Estatus actual: No afiliado. Afiliada en 2013 Oficio REP-PT-INE-PVG-002/2018 ²⁴⁸ Remitió escrito de dicho instituto político de 15 de diciembre de 2017, mediante el cual le informan a la ciudadana que fue dada de baja del padrón de afiliados. ²⁴⁹
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p>				

²⁴⁴ Visible a página 246 del expediente.

²⁴⁵ Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

²⁴⁶ Visible a página 1452 del expediente.

²⁴⁷ Visible a página 253 del expediente.

²⁴⁸ Visible a páginas 894-896 del expediente.

²⁴⁹ Visible a páginas 923-924 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
<p>Además, si bien el PT aportó documentales para, a su parecer, acreditar la afiliación, lo cierto es que se trata de documentos internos emitidos por dicho partido político, en los que, en ninguno de ellos, se aprecia la voluntad de la denunciante de pertenecer al partido, por ende, no son suficientes para acreditar una debida afiliación.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
30	Florentino Yectli Solís	11/12/2017 ²⁵⁰	Estatus actual: Afiliado Alta 05/02/2014	Estatus actual: Afiliado. Escrito de 29/01/2018, ²⁵¹ por el que informó que no ha sido posible encontrar documentales respecto al denunciante.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Adicional a lo anterior, el ciudadano al desahogar la vista para formular alegatos²⁵², esencialmente, ratificó su negativa de registro como militante del PT.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
31	Yessica Bárcenas Benítez	11/12/2017 ²⁵³	Estatus actual: No afiliada Alta 24/03/2011 Cancelación 14/12/2017	Estatus actual: No afiliado. Afiliada en 2011 Oficio REP-PT-INE-PVG-002/2018, ²⁵⁴ Remitió copia certificada de escrito de 11 de diciembre de 2017, por el que la ciudadana solicitó su baja del padrón de afiliados, ²⁵⁵ de la

²⁵⁰ Visible a página 259 del expediente.

²⁵¹ Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

²⁵² Visible a página 1909 y anexos a páginas 1910-1918 del expediente.

²⁵³ Visible a página 305 del expediente.

²⁵⁴ Visible a páginas 894-896 del expediente.

²⁵⁵ Visible a página 922 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
				documentación soporte del proceso de baja de la referida ciudadana, y escrito por el cual le notifican que su solicitud fue atendida. ²⁵⁶

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue afiliada al PT.

Ahora bien, obra en el presente asunto copia certificada de escrito signado²⁵⁷ por Yessica Bárcenas Benítez, dirigido tanto al PT en el estado de Guerrero como al INE, en el que, esencialmente, manifestó: *Por medio del presente documento vengo a reconocer que fue mi voluntad de manera libre, sin coacción ni violencia afiliarme al Partido del Trabajo en 2011, por lo que desde este momento reconozco que si me afilie al Partido del Trabajo en el año que comento.*

Es importante destacar, que, si bien la quejosa, en la misma temporalidad, presentó tanto su escrito de queja por afiliación indebida como el escrito dirigido al PT solicitando su renuncia a dicho instituto político, se considera que debe prevalecer este último.

Lo anterior, se considera así, porque en caso de que la ciudadana efectivamente hubiera tenido una inconformidad con el partido político denunciado al haber sido registrada, según su dicho, en contra de su voluntad y de forma indebida en el padrón de militantes del PT, para lo cual, además, utilizaron indebidamente sus datos personales, debió presentar ante ese instituto político una solicitud de desafiliación, haciendo patente su desaprobación por el multicitado registro, circunstancia que no aconteció, ya que con pleno conocimiento de su afiliación firmó una carta de renuncia a la militancia, en la que reconoce su voluntad de afiliarse de forma libre y sin coacción.

El PT aportó tal documentación, sin que esta haya sido objetada o controvertida por la quejosa, al no dar contestación a la vista que le fue formulada con las constancias atinentes, sobre la cual no se pronunció.

Es por ello que la conclusión debe ser que **NO se trata de una afiliación indebida.**

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
32	Elvira Fernández Cornejo	13/12/2017 ²⁵⁸	Estado actual: No afiliada Alta 05/03/2014 Cancelación 11/12/2017	Estatus actual: No afiliado. Afiliada en 2006 Escrito de 29/01/2018. ²⁵⁹ Informó que se dio de baja del padrón de afiliados a la quejosa, remitió

²⁵⁶ Visible a páginas 935-940 del expediente.

²⁵⁷ Visible a página 922 del expediente.

²⁵⁸ Visible a páginas 322-324 del expediente.

²⁵⁹ Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
				copia certificada de la documentación correspondiente a los oficios de baja del padrón de afiliados. ²⁶⁰

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.

Además, si bien el PT aportó documentales para, a su parecer, acreditar la afiliación, lo cierto es que se trata de documentos internos emitidos por dicho partido político, en los que, en ninguno de ellos, se aprecia la voluntad de la denunciante de pertenecer al partido, por ende, no son suficientes para acreditar una debida afiliación.

Adicional a lo anterior, la ciudadana al desahogar la vista para formular alegatos²⁶¹, argumentó, esencialmente, *...no me fue entregada credencial alguna por el multicitado partido político y que de manifestar lo contrario el Partido del Trabajo le solicito muestre el acuse de recibo respectivo.*

Es por ello que la conclusión debe ser que **Sí** se trata de una **afiliación indebida**.

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
33	Oliver Juamat Gómez León	14/12/2017 ²⁶²	Estatus actual: No afiliado Alta 06/10/2014 Cancelación 14/12/2017	Estatus actual: No afiliado. Afiliado en 2014 Oficio REP-PT-INE-PVG-002/2018. ²⁶³ Remitió copia certificada del escrito firmado por el quejoso, solicitando la baja del padrón de afiliados del PT, el 14 de diciembre de 2017, así como de la documentación del proceso de baja, todo de la misma fecha. ²⁶⁴

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue afiliado al PT.

²⁶⁰ Visible a páginas 1533-1538 del expediente.

²⁶¹ Visible a páginas 1939-1940 del expediente.

²⁶² Visible a páginas 356-357 del expediente.

²⁶³ Visible a páginas 894-896 del expediente.

²⁶⁴ Visible a páginas 929-934 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
<p>Es importante precisar, obra en el presente asunto copia certificada de escrito signado²⁶⁵ por Oliver Juamat Gómez León, dirigido tanto al PT en la Ciudad de México como al <i>INE</i>, en el que, esencialmente, manifestó: <i>Por medio del presente documento vengo a reconocer que fue mi voluntad de manera libre, sin coacción ni violencia afiliarme al Partido del Trabajo en 2014, por lo que desde este momento reconozco que si me afilie al Partido del Trabajo en el año que comento.</i></p> <p>Además, si bien el quejoso, en la misma temporalidad, presentó tanto su escrito de queja por afiliación indebida, como el escrito dirigido al <i>PT</i> solicitando su renuncia a dicho instituto político, se considera que debe prevalecer este último.</p> <p>Lo anterior, se considera así, porque en caso de que el ciudadano efectivamente hubiera tenido una inconformidad con el partido político denunciado al haber sido registrado, según su dicho, en contra de su voluntad y de forma indebida en el padrón de militantes del <i>PT</i>, para lo cual, además, utilizaron indebidamente sus datos personales, debió presentar ante ese instituto político una solicitud de desafiliación, haciendo patente su desaprobación por el multicitado registro, circunstancia que no aconteció, ya que con pleno conocimiento de su afiliación firmó una carta de renuncia a la militancia, en la que reconoce su voluntad de afiliarse de forma libre y sin coacción.</p> <p>El PT aportó tal documentación, sin que esta haya sido objetada o controvertida por el quejoso, al no dar contestación a la vista que le fue formulada con las constancias atinentes, sobre la cual no se pronunció.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que NO se trata de una afiliación indebida.</p>				

N o	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
34	Erika Jiménez Rueda	15/12/2017 ²⁶⁶	Estatus actual: No afiliada Alta 20/08/2014 Cancelación 19/12/2017	Estatus actual: No afiliado. Afiliada en 2014 Oficio REP-PT-INE-PVG-002/2018. ²⁶⁷ Remitió copia certificada de escrito de 15 de diciembre de 2017, por medio del cual le informan a la ciudadana que fue dada de baja del padrón de afiliados del <i>PT</i> . ²⁶⁸
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue registrada como militante del PT y el citado instituto político no aportó</p>				

²⁶⁵ Visible a página 929 del expediente.

²⁶⁶ Visible a página 364 del expediente.

²⁶⁷ Visible a páginas 894-896 del expediente.

²⁶⁸ Visible a páginas 927-928 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

N o	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
<p>elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Además, si bien el PT aportó documentales para, a su parecer, acreditar la afiliación, lo cierto es que se trata de documentos internos emitidos por dicho partido político, en los que, en ninguno de ellos, se aprecia la voluntad de la denunciante de pertenecer al partido, por ende, no son suficientes para acreditar una debida afiliación.</p> <p>Adicional a lo anterior, la ciudadana al desahogar la vista para formular alegatos²⁶⁹ ratificó su escrito de queja por el que denunció su afiliación indebida por parte del PT.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
35	Rosa Argentina Guadarrama Rosales	12/12/2017 ²⁷⁰	Estatus actual: Afiliada Alta 18/12/2013	<p>Estatus actual: No afiliado.</p> <p>Afiliada en 2013</p> <p>Oficio REP-PT-INE-PVG-002/2018. Remitió copia certificada del escrito de 1 de diciembre de 2017, firmado por la denunciante, mediante el cual solicita su baja del padrón de afiliados del PT y del escrito por el cual le informan que ha sido dada de baja del citado padrón.²⁷¹</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del PT.</p> <p>Es importante referir que, si bien el citado instituto político presentó copia certificada de un escrito de uno de diciembre de dos mil diecisiete, signado por Rosa Argentina Guadarrama Rosales en el que se asentó: <i>Por medio de la presente carta doy uso de la palabra para solicitar mi baja del Partido del Trabajo como militante por razones labores quedando de antemano a sus órdenes gracias (sic)</i>, lo cierto es que no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p>				

²⁶⁹ Visible a página 2142 del expediente.

²⁷⁰ Visible a página 373 del expediente.

²⁷¹ Visible a páginas 907-910 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
Cabe precisar que mediante Acuerdo de quince de agosto de dos mil dieciocho, se requirió al <i>PT</i> con el objeto de que se sirviera proporcionar el formato original de afiliación y el escrito original de renuncia a la militancia presentada por la ciudadana en cita, sin embargo, dicho partido político solo presentó, de nueva cuenta, copia certificada del escrito de renuncia.				
Es por ello que la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
36	Jesús Alberto Meráz Navarrete	12/12/2017 ²⁷²	Estatus actual: Afiliado Alta 18/12/2013	Estatus actual: No afiliado. Afiliado en 2013 Oficio REP-PT-INE-PVG-002/2018. ²⁷³ Remitió copia certificada de la solicitud de baja realizada por el ciudadano, el 1 de diciembre de 2017 y del escrito de 4 del mismo mes y año, mediante el cual le informan al denunciante que ha sido dado de baja del padrón de afiliados del <i>PT</i> . ²⁷⁴

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, no existe controversia en el sentido de que el denunciante se afilió al *PT*.

Es importante referir que, si bien el citado instituto político presentó copia certificada de un escrito signado por Jesús Alberto Meráz Navarrete, por medio del cual manifestó lo siguiente: *Por medio de la presente carta hago uso de la palabra para solicitar mi baja del Partido del Trabajo como militante por razones laborales. Quedando de antemano a sus órdenes, gracias. (sic)*, lo cierto es que no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.

Cabe precisar que mediante Acuerdo de quince de agosto de dos mil dieciocho, se requirió al *PT* con el objeto de que se sirviera proporcionar el formato original de afiliación y el escrito original de renuncia a la militancia presentada por el ciudadano en cita, sin embargo, dicho partido político solo presentó, de nueva cuenta, copia certificada del escrito de renuncia.

Es por ello que la conclusión debe ser que **Sí se trata de una afiliación indebida.**

²⁷² Visible a página 377 del expediente.

²⁷³ Visible a páginas 894-896 del expediente.

²⁷⁴ Visible a páginas 903-906 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
37	Ariana María Domínguez Cenicerros	12/12/2017 ²⁷⁵	Estatus actual: No Afiliada Alta 09/01/2014 Cancelación 13/12/2017	Estatus actual: No afiliado. Afiliada en 2014 Oficio REP-PT-INE-PVG-002/2018, ²⁷⁶ Remitió copia certificada del formato de afiliación, de la solicitud de baja realizada por la denunciante de 12 diciembre de 2017 y del escrito de misma fecha, por medio del cual le notifican a la ciudadana que ha sido dada de baja del padrón de afiliados del PT. ²⁷⁷

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, no existe controversia en el sentido de que la denunciante está afiliada al PT.

El PT aportó copia certificada de copia certificada de cédula de afiliación de la ciudadana, sin que esta haya sido objetada o controvertida por la quejosa, al no dar contestación a la vista que le fue formulada con las constancias atinentes, sobre la cual no se pronunció.

Además, dicho instituto político presentó escrito de doce de diciembre de dos mil diecisiete, signado por Ariana María Domínguez Cenicerros, en el que asentó: *...me doy de baja del partido del PT porque no me di cuenta que me había afiliado al partido y también por motivos del trabajo (INE).*

En consecuencia, la conclusión debe ser que **NO se trata de una afiliación indebida.**

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
38	María Guadalupe Vargas Durán	11/12/2017 ²⁷⁸	Estatus actual: No afiliada Alta 10/03/2008 Cancelación 13/12/2017	En proceso de desafiliación. Oficio REP-PT-INE-PVG-002/2018, ²⁷⁹ Remitió copia certificada de la solicitud de baja del padrón de afiliados del PT realizada por la denunciante, el 11 diciembre de 2017 y del escrito de misma fecha, por medio del cual le notifican a la

²⁷⁵ Visible a página 384 del expediente.

²⁷⁶ Visible a páginas 894-896 del expediente.

²⁷⁷ Visible a páginas 898-902 del expediente.

²⁷⁸ Visible a página 388 del expediente.

²⁷⁹ Visible a páginas 894-896 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
				ciudadana que ha sido dada de baja del padrón de afiliados del PT. ²⁸⁰
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue afiliada al PT.</p> <p>Es importante referir que, si bien el citado instituto político presentó copia certificada de escrito signado por María Guadalupe Vargas Durán, por medio del cual manifestó lo siguiente: <i>Solicito se me dé de baja del Partido PT por motivos de trabajo, creo que fui afiliada cuando rentaba un puesto en el pasito, el cual ya no rento, y ahora lo requiero (la baja) ya q empezare a trabajar y el requisito es q no este afiliado a ningún partido. (sic)</i>, lo cierto es que no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Cabe precisar que mediante Acuerdo de quince de agosto de dos mil dieciocho, se requirió al PT con el objeto de que se sirviera proporcionar el formato original de afiliación y el escrito original de renuncia a la militancia presentada por el ciudadano en cita, sin embargo, dicho partido político solo presentó, de nueva cuenta, copia certificada del escrito de renuncia.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
39	Georgina Edith López Sosa	13/12/2017 ²⁸¹	Estatus actual: Afiliada Alta 02/12/2014	En proceso de desafiliación. Afiliada en 2014 Oficio REP-PT-INE-PVG-002/2018. ²⁸² Remitió copia certificada de formato de su afiliación y del escrito de 13 de diciembre de 2017, por medio del cual se solicita la baja del padrón de afiliados del PT. ²⁸³
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, no existe controversia en el sentido de que el denunciante está afiliado al PT.</p>				

²⁸⁰ Visible a páginas 911-913 del expediente.

²⁸¹ Visible a página 391 del expediente.

²⁸² Visible a páginas 894-896 del expediente.

²⁸³ Visible a páginas 914-916 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
<p>El PT aportó copia certificada de cédula de afiliación de la ciudadana, sin que esta haya sido objetada o controvertida por la quejosa, al no dar contestación a la vista que le fue formulada con las constancias atinentes, sobre la cual no se pronunció.</p> <p>En consecuencia, la conclusión debe ser que NO se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
40	Diana García Mejía	09/12/2017 ²⁸⁴	Estatus actual: Afiliada Alta 05/02/2015	Estatus actual: Afiliado. Afiliada en 2014 Oficio REP-PT-INE-PVG-004/2018, ²⁸⁵ por el que remitió copia certificada del formato de afiliación. ²⁸⁶
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, no existe controversia en el sentido de que la denunciante está afiliada al PT.</p> <p>El PT aportó copia certificada de cédula de afiliación de la ciudadana, sin que esta haya sido objetada o controvertida por la quejosa, al no dar contestación a la vista que le fue formulada con las constancias atinentes, sobre la cual no se pronunció.</p> <p>En consecuencia, la conclusión debe ser que NO se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
41	Víctor Ignacio González Legarda	14/02/2017 ²⁸⁷	Estatus actual: No Afiliado Alta 28/11/2014 Cancelación 19/12/2017	Estatus actual: No afiliado. Afiliado en 2014 Oficio REP-PT-INE-PVG-002/2018, ²⁸⁸ Remitió copia certificada de la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales en posesión del PT, de 15 de diciembre de 2017 y escrito informando al ciudadano

²⁸⁴ Visible a página 398 del expediente.

²⁸⁵ Visible a páginas 993-994 del expediente.

²⁸⁶ Visible a página 995 del expediente.

²⁸⁷ Visible a página 405 del expediente.

²⁸⁸ Visible a páginas 894-896 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
				que fue dado de baja del padrón. ²⁸⁹

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.

Además, si bien el PT aportó documentales para, a su parecer, acreditar la afiliación, lo cierto es que se trata de documentos internos emitidos por dicho partido político, en los que, en ninguno de ellos, se aprecia la voluntad del denunciante de pertenecer al partido, por ende, no son suficientes para acreditar una debida afiliación.

Es por ello que la conclusión debe ser que **SÍ** se trata de una **afiliación indebida**.

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
42	Ariana Itzel Linares Sánchez	12/12/2017 ²⁹⁰	Estatus actual: Afiliada Alta 23/04/2014	Estatus actual: Afiliado. Escrito de 29/01/2018, ²⁹¹ por el que informó que no ha sido posible encontrar documentales respecto a la denunciante.

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.

Es por ello que la conclusión debe ser que **SÍ** se trata de una **afiliación indebida**.

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
43	Rosa Elena González Alemán	08/12/2017 ²⁹²	Estatus actual: Afiliada Alta 07/11/2014	Estatus actual: Afiliado. Afiliada en 2014 Oficios REP-PT-INE-PVG-002/2018 ²⁹³ y REP-PT-INE-

²⁸⁹ Visible a páginas 917-919 del expediente.

²⁹⁰ Visible a páginas 410-411 del expediente.

²⁹¹ Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

²⁹² Visible a páginas 423-424 del expediente.

²⁹³ Visible a páginas 894-896 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
				PVG-043/2018. ²⁹⁴ Remitió copia certificada del formato de afiliación, y la solicitud de baja, ²⁹⁵ manifestando que fue su voluntad afiliarse al PT en 2014. ²⁹⁶
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante es afiliada al PT.</p> <p>Ahora bien, obra en el presente asunto copia certificada de escrito signado²⁹⁷ por Rosa Elena González Alemán, dirigido tanto al PT en el estado de Veracruz como al INE, en el que, esencialmente, manifestó: <i>Por medio del presente documento vengo a reconocer que fue mi voluntad de manera libre, sin coacción ni violencia afiliarme al Partido del Trabajo en 2014, por lo que desde este momento reconozco que si me afilie al Partido del Trabajo en el año que comento.</i></p> <p>Es importante referir que la ciudadana en cuestión al dar contestación a la vista de alegatos²⁹⁸ manifestó, esencialmente, que...<i>solo puedo manifestar que una vez más el partido político denominado Partido del Trabajo se aprovechó de mi buena fe, que en su momento le firme ese escrito solo porque manifestaron que si lo hacía mi trámite sería más ágil, por lo que desconozco el escrito en mención y me apego a mis escritos de siete y ocho de diciembre de dos mil diecisiete, así como los ratifico en todo y cada una de sus partes.</i></p> <p>No obstante, lo anterior, como se señaló, el escrito en mención no es el único documento signado por la ciudadana en el que hace manifiesta su afiliación al PT, sino que, además, obra copia certificada de la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Además, cabe precisar que, al dar contestación a la vista de alegatos, la denunciante no controvertió el contenido de las documentales aportadas por el PT, habida cuenta que con tales constancias se le corrió traslado, a efecto de que se pronunciara al respecto en la etapa de alegatos, sin que objetara su autenticidad, así como tampoco su alcance y valor probatorio; lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de Quejas.</p> <p>Con base en lo expuesto, la existencia del referido documento, no es un hecho controvertido, al cual debe concederse el valor y eficacia probatoria plena.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que NO se trata de una afiliación indebida.</p>				

²⁹⁴ Visible a páginas 1723-1725 del expediente.

²⁹⁵ Visible a páginas 894-896 del expediente.

²⁹⁶ Visible a páginas 920-921 y 1732 del expediente.

²⁹⁷ Visible a página 1732 del expediente.

²⁹⁸ Visible a página 1927 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
44	Silvia Aguilar Córdova	08/12/2017 ²⁹⁹	Estatus actual: Afiliada Alta 25/11/2013	Estatus actual: Afiliado. Escrito de 29/01/2018. ³⁰⁰ Informó que no ha sido posible encontrar documentales respecto a la denunciante.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
45	Juan Carlos Mora García	20/12/2017 ³⁰¹	Estatus actual: Afiliado Alta 01/12/2011	Estatus actual: No afiliado. Afiliado en 2011 Escrito de 29/01/2018, ³⁰² por el que informó que fue dado de baja del padrón de afiliados del PT, remitió copia certificada de los oficios del proceso de baja del quejoso, escrito de 04/12/17 dirigido al INE y al PT en Guerrero. ³⁰³
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que el denunciante es afiliado al PT.</p> <p>Ahora bien, obra en el presente asunto copia certificada de escrito signado³⁰⁴ por Juan Carlos Mora García, dirigido tanto al PT en el estado de Guerrero como al INE, en el que, esencialmente, manifestó: <i>Por medio del presente documento vengo a reconocer que fue mi voluntad de manera libre, sin coacción ni violencia afiliarme al Partido del Trabajo 1/12/2011, por lo que desde este momento reconozco que si me afilie al Partido del Trabajo en el año que comento.</i></p>				

²⁹⁹ Visible a página 432 del expediente.

³⁰⁰ Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

³⁰¹ Visible a página 446 del expediente.

³⁰² Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

³⁰³ Visible a páginas 1504-1511 del expediente.

³⁰⁴ Visible a página 1732 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
<p>Además, si bien el quejoso, en la misma temporalidad, presentó tanto su escrito de queja por afiliación indebida como el escrito dirigido al <i>PT</i> solicitando su renuncia a dicho instituto político, se considera que debe prevalecer este último.</p> <p>Lo anterior, se considera así, porque en caso de que el ciudadano efectivamente hubiera tenido una inconformidad con el partido político denunciado al haber sido registrado, según su dicho, en contra de su voluntad y de forma indebida en el padrón de militantes del <i>PT</i>, para lo cual, además, utilizaron indebidamente sus datos personales, debió presentar ante ese instituto político una solicitud de desafiliación, haciendo patente su desaprobación por el multicitado registro, circunstancia que no aconteció, ya que con pleno conocimiento de su afiliación firmó una carta de renuncia a la militancia, en la que reconoce su voluntad de afiliarse de forma libre y sin coacción.</p> <p>El <i>PT</i> aportó tal documentación, sin que esta haya sido objetada o controvertida por la quejosa, al no dar contestación a la vista que le fue formulada con las constancias atinentes, sobre la cual no se pronunció.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que NO se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
46	Gilberta Casilda Vázquez Álvarez	18/12/2017 ³⁰⁵	Estatus actual: Afiliada Alta 24/12/2013	Estatus actual: Afiliado. Afiliada en 2013 Escrito de 29/01/2018. ³⁰⁶ Remitió copia certificada de formato de afiliación y carta renuncia de afiliación al <i>PT</i> de 22/12/13. ³⁰⁷
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue debidamente afiliada al <i>PT</i>, ya que el citado instituto político aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como cédula de afiliación del año dos mil trece, así como carta de renuncia de veintidós de diciembre de dos mil trece, en la que se asentó: <i>Que con esta fecha renunció a todas y cada una de las afiliaciones hechas con anterioridad a los partidos políticos existentes en México, dejando vigente a partir de esta fecha la afiliación realizada al Partido del Trabajo, por así convenir a mis intereses políticos y ciudadanos...</i></p> <p>Es importante referir que, si bien la denunciante manifestó, en vía de alegatos,³⁰⁸ que la fotografía que aparece en el formato de afiliación no corresponde a ella, misma, que según su dicho, esta “borrosa”, lo cierto es que ese argumento es irrelevante, ya que no controvertió la firma y datos asentados en el documento.</p>				

³⁰⁵ Visible a páginas 453-454 del expediente.

³⁰⁶ Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

³⁰⁷ Visible a páginas 1449-1451 del expediente.

³⁰⁸ Visible a página 2141 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
<p>Además, cabe precisar que, al dar contestación a la vista de alegatos, la denunciante no controvertió el contenido de las documentales aportadas por el PT, habida cuenta que con tales constancias se le corrió traslado, a efecto de que se pronunciara al respecto en la etapa de alegatos, sin que objetara su autenticidad, así como tampoco su alcance y valor probatorio; lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de Quejas.</p> <p>Con base en lo expuesto, la existencia del referido documento, no es un hecho controvertido, al cual debe concederse el valor y eficacia probatoria plena.</p> <p>Por lo que la conclusión debe ser que NO se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
47	Elena Orta Flores	18/12/2017 ³⁰⁹	<p>Estatus actual: No afiliada</p> <p>Alta 16/08/2014</p> <p>Cancelación 15/12/2017</p>	<p>Estatus actual: No afiliado.</p> <p>Afiliada en 2014</p> <p>Escrito de 29/01/2018.³¹⁰ Informó que fue dada de baja del padrón de afiliados del PT, remitió copia certificada de los oficios del proceso de baja de la quejosa, así como de desconocimiento dirigido al PT de 15/12/2017.³¹¹</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Además, si bien el PT aportó documentales para, a su parecer, acreditar la afiliación, lo cierto es que se trata de documentos internos emitidos por dicho partido político, en los que, en ninguno de ellos, se aprecia la voluntad de la denunciante de pertenecer al partido, por ende, no son suficientes para acreditar una debida afiliación.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>				

³⁰⁹ Visible a página 464 del expediente.

³¹⁰ Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

³¹¹ Visible a páginas 1539-1544 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
48	María Yanelly Palmas Íñiguez	15/12/2017 ³¹²	No afiliada Alta 24/11/2014 Cancelación 19/12/2017	Estatus actual: No afiliado. Afiliada en 2014 Oficio REP-PT-INE-PVG-007/2018. ³¹³ Remitió copia certificada de escrito de 15 de diciembre de 2017, por el cual le informan a la ciudadana que fue dada de baja del padrón de afiliados del PT. ³¹⁴

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.

Además, si bien el PT aportó documentales para, a su parecer, acreditar la afiliación, lo cierto es que se trata de documentos internos emitidos por dicho partido político, en los que, en ninguno de ellos, se aprecia la voluntad de la denunciante de pertenecer al partido, por ende, no son suficientes para acreditar una debida afiliación.

Es por ello que la conclusión debe ser que **Sí** se trata de una **afiliación indebida**.

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
49	Leonel Efrén Luque González	16/12/2017 ³¹⁵	Estatus actual: Afiliado Alta 26/06/2008	Estatus actual: Afiliado. Escrito de 29/01/2018. ³¹⁶ Informó que no ha sido posible encontrar documentales respecto al denunciante.

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.

Es por ello que la conclusión debe ser que **Sí** se trata de una **afiliación indebida**.

³¹² Visible a página 467 del expediente.

³¹³ Visible a páginas 1193-1194 del expediente.

³¹⁴ Visible a páginas 1208-1209 del expediente.

³¹⁵ Visible a páginas 476-477 del expediente.

³¹⁶ Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
50	Rosario Gómez Ruiz	16/12/2017 ³¹⁷	Estatus actual: Afiliada Alta 05/11/2014	Estatus actual: Afiliado. Escrito de 29/01/2018. ³¹⁸ Informó que no ha sido posible encontrar documentales respecto a la denunciante.

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.

Es por ello que la conclusión debe ser que **Sí** se trata de una **afiliación indebida**.

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
51	Ma. Guadalupe García Llamas	20/12/2017 ³¹⁹	Estatus actual: No afiliada Alta 03/02/2017 Cancelación 21/12/2017	Estatus actual: Afiliado. Escrito de 29/01/2018. ³²⁰ Informó que no ha sido posible encontrar documentales respecto a la denunciante.

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.

Es por ello que la conclusión debe ser que **Sí** se trata de una **afiliación indebida**.

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
52	Aurora Reyes Mejía	05/12/2017 ³²¹	Estatus actual: Afiliada Afiliada en 09/10/2014	Estatus actual: Afiliado. Afiliada en 2014 Escrito de 29/01/2018. ³²² Remitió copia certificada del formato de afiliación de la quejosa. ³²³

³¹⁷ Visible a páginas 483-484 del expediente.

³¹⁸ Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

³¹⁹ Visible a páginas 491-492 del expediente.

³²⁰ Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

³²¹ Visible a páginas 501-502 del expediente.

³²² Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

³²³ Visible a página 1442 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, no existe controversia en el sentido de que la denunciante está afiliada al <i>PT</i>.</p> <p>El PT aportó copia certificada de cédula de afiliación de la ciudadana, sin que esta haya sido objetada o controvertida por la quejosa, al no dar contestación a la vista que le fue formulada con las constancias atinentes, sobre la cual no se pronunció.</p> <p>En consecuencia, la conclusión debe ser que NO se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
54	Rigoberto Segura Solís.	18/12/2017 ³²⁴	Estatus actual: Afiliado Alta 30/03/2001	Estatus actual: Afiliado. Escrito de 29/01/2018. ³²⁵ Informó que no ha sido posible encontrar documentales respecto al denunciante.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
55	Rogelio Díaz Saavedra	19/12/2017 ³²⁶	Estatus actual: Afiliado Alta 02/08/2010	Estatus actual: Afiliado. Escrito de 29/01/2018. ³²⁷ Informó que no ha sido posible encontrar documentales respecto al denunciante.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p>				

³²⁴ Visible a página 538 del expediente.

³²⁵ Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

³²⁶ Visible a páginas 558-559 del expediente.

³²⁷ Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
Es por ello que la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida .				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
56	Elvia de la Cruz Acosta	19/12/2017 ³²⁸	Estatus actual: No afiliada Alta 20/11/2013 Cancelación 08/01/2018	Estatus actual: No afiliado. Afiliada en 2013 Oficio REP-PT-INE-PVG-007/2018. ³²⁹ Remitió copia certificada del escrito de 22 de diciembre de 2017, por el cual le informan a la ciudadana que fue dada de baja del padrón de afiliados del PT. ³³⁰
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Además, si bien el PT aportó documentales para, a su parecer, acreditar la afiliación, lo cierto es que se trata de documentos internos emitidos por dicho partido político, en los que, en ninguno de ellos, se aprecia la voluntad de la denunciante de pertenecer al partido, por ende, no son suficientes para acreditar una debida afiliación.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
57	María del Rosario Román Antúnez.	20/12/2017 ³³¹	Estatus actual: Afiliada Alta 03/05/2010	Estatus actual: Afiliado. Escrito de 29/01/2018. ³³² Informó que no ha sido posible encontrar documentales respecto a la denunciante.

³²⁸ Visible a páginas 565-566 del expediente.

³²⁹ Visible a páginas 1193-1194 del expediente.

³³⁰ Visible a páginas 1202-1203 del expediente.

³³¹ Visible a página 572 del expediente.

³³² Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

N o	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
58	Jaqueline Alfaro Jiménez	20/12/2017 ³³³	Estatus actual: No afiliada Alta 09/12/2014 Cancelación 21/12/2017	Estatus actual: No afiliado. Afiliada en 2014 Escrito de 29/01/2018. ³³⁴ Informó que fue dada de baja del padrón de afiliados del PT, remitió copia certificada de los oficios del proceso de baja de la quejosa. ³³⁵
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Además, si bien el PT aportó documentales para, a su parecer, acreditar la afiliación, lo cierto es que se trata de documentos internos emitidos por dicho partido político las cuales, en ningún caso, acreditan una debida afiliación.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
59	Ma. Anita Gutiérrez Rodríguez	07/12/2017 ³³⁶	Estatus actual: Afiliada Alta 14/08/2014	Estatus actual: Afiliado. Escrito de 29/01/2018. ³³⁷ Informó que no ha sido posible encontrar documentales respecto a la denunciante.

³³³ Visible a páginas 585-586 del expediente.

³³⁴ Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

³³⁵ Visible a páginas 1472-1479 del expediente.

³³⁶ Visible a página 589 del expediente.

³³⁷ Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
60	Samuel Evaristo Tapia Rubio	14/12/2017 ³³⁸	No afiliado Alta 15/01/2014 Cancelación 11/12/2017	Estatus actual: No afiliado. Afiliado 2014 Escrito signado por el integrante del Sistema Nacional de Afiliación, por el cual le notifican al quejoso que fue dado de baja del padrón de afiliados del PT. ³³⁹
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Además, si bien el PT aportó documentales para, a su parecer, acreditar la afiliación, lo cierto es que se trata de documentos internos emitidos por dicho partido político las cuales, en ningún caso, acreditan una debida afiliación.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
61	Perla Azenet García Garza	15/12/2017 ³⁴⁰	Estatus actual: No afiliada Alta 29/11/2013 Cancelación 21/12/2017	Estatus actual: No afiliado. Afiliada en 2013 Oficio REP-PT-INE-PVG-007/2018. ³⁴¹ Remitió copia certificada del formato de afiliación, del escrito de 13 de

³³⁸ Visible a página 605 del expediente.

³³⁹ Visible a páginas 1549-1550 del expediente.

³⁴⁰ Visible a página 624 del expediente.

³⁴¹ Visible a páginas 1193-1194 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
				diciembre de 2017, por medio del cual le notifican a la ciudadana que fue dada de baja del padrón de afiliados del PT. ³⁴²
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue afiliada al PT.</p> <p>El PT aportó copia certificada del formato de afiliación de la ciudadana, y copia de la credencial para votar de Perla Azenet García Garza.</p> <p>Es importante referir que la ciudadana en cuestión al dar contestación a la vista de alegatos³⁴³ manifestó, esencialmente, que...<i>el escrito que presentó el Partido del Trabajo donde supuestamente solo se afilió a dicho partido fue llenada a partir de la credencial de elector que me fue solicitada a cambio de seguir laborando en un mercado sobre ruedas, jamás se me informó que estaría siendo afiliada a dicho partido, a lo cual a base de engaños tenía que firmar un pequeño recuadro en una hoja para una supuesta credencial que se acreditaría a la suscrita como vendedora en dicho mercado (la cual jamás se me hizo llegar), y además la fotografía que se me tomo también referente a la misma credencial para acreditar a la suscrita como vendedora; en la opción grado de estudios se manifiesta que solo es primaria, lo cual es completamente falso, anexó copia de la cedula para acreditar el grado de estudios verdadero de la suscrita.</i></p> <p>Con base en lo anterior, aún y cuando esta ciudadana persiste en oponerse a la debida afiliación, refiriendo al respecto las justificaciones antes señaladas, lo cierto es que no aporta algún medio de prueba que permita inferir a esta autoridad la veracidad de su dicho, además, como se señaló, el escrito en mención no es el único documento signado por la ciudadana, sino que, además, obra copia certificada de la cédula de afiliación al PT, en la cual, como ella misma reconoce, plasmó su firma e incluso se dejó fotografiar para una presunta credencial.</p> <p>Esto es, al dar contestación a la vista de alegatos, la denunciante no controvertió el contenido de las documentales aportadas por el PT, habida cuenta que con tales constancias se le corrió traslado, a efecto de que se pronunciara al respecto en la etapa de alegatos, sin que objetara su autenticidad, así como tampoco su alcance y valor probatorio; lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de Quejas.</p> <p>Con base en lo expuesto, la existencia del referido documento, no es un hecho controvertido, al cual debe concederse el valor y eficacia probatoria plena.</p> <p>No pasa inadvertido que la quejosa manifiesta que firmó el aludido documento con la finalidad de seguir laborando en un mercado sobre ruedas, sin embargo, no precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que supuestamente se llevó a cabo el hecho que hace del conocimiento de esta autoridad electoral, ni tampoco presentó algún medio de prueba para corroborar su dicho.</p>				

³⁴² Visible a páginas 1198-1199 y 1747-1748 del expediente.

³⁴³ Visible a página 1944 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
Es por ello que la conclusión debe ser que NO se trata de una afiliación indebida.				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
62	Graciela Marina Rivera Zamudio	15/12/2017 ³⁴⁴	Estatus actual: No afiliada Alta 25/10/2007 Cancelación 13/12/2017	Estatus actual: No afiliado. Afiliada en 2007 Escrito de 29/01/2018. ³⁴⁵ Informó que fue dada de baja del padrón de afiliados del <i>PT</i> , remitió copia certificada del oficio por el cual le notifican a la quejosa que fue dada de baja del padrón en cita. ³⁴⁶
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Además, si bien el PT aportó documentales para, a su parecer, acreditar la afiliación, lo cierto es que se trata de documentos internos emitidos por dicho partido político, en los que, en ninguno de ellos, se aprecia la voluntad de la denunciante de pertenecer al partido, por ende, no son suficientes para acreditar una debida afiliación.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
63	Dionisio Fernández Hernández	20/12/2017 ³⁴⁷	Estatus actual: No afiliada Alta 02/09/2014 Cancelación 20/12/2017	Estatus actual: No afiliado. 2014 Escrito de 29/01/2018. ³⁴⁸ Informó que fue dada de baja del padrón de afiliados del <i>PT</i> , remitió copia certificada del oficio por el cual le

³⁴⁴ Visible a páginas 631-632 del expediente.

³⁴⁵ Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

³⁴⁶ Visible a páginas 1545-1546 del expediente.

³⁴⁷ Visible a páginas 635-636 del expediente.

³⁴⁸ Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
				notifican al quejoso que fue dada de baja del padrón en cita. ³⁴⁹

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.

Además, si bien el PT aportó documentales para, a su parecer, acreditar la afiliación, lo cierto es que se trata de documentos internos emitidos por dicho partido político las cuales, en ningún caso, acreditan una debida afiliación.

Es por ello que la conclusión debe ser que **Sí** se trata de una **afiliación indebida**.

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
64	Alicia Sánchez Flores	20/12/2017 ³⁵⁰	Estatus actual: Afiliada Alta 26/03/2014	Estatus actual: No afiliado. Afiliada en 2014 Escrito de 29/01/2018. ³⁵¹ Informó que fue dada de baja del padrón de afiliados del PT, remitió copia certificada del oficio por el cual le notifican a la quejosa su baja del padrón. ³⁵²

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.

Además, si bien el PT aportó documentales para, a su parecer, acreditar la afiliación, lo cierto es que se trata de documentos internos emitidos por dicho partido político las cuales, en ningún caso, acreditan una debida afiliación.

Es por ello que la conclusión debe ser que **Sí** se trata de una **afiliación indebida**.

³⁴⁹ Visible a página 1553 del expediente.

³⁵⁰ Visible a página 649 del expediente.

³⁵¹ Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

³⁵² Visible a páginas 1554-1555 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
65	María Natividad Ruiz Meza	20/12/2017 ³⁵³	Estatus actual: Afiliada Alta 11/12/2013	Estatus actual: Afiliado. Escrito de 29/01/2018. ³⁵⁴ Informó que no ha sido posible encontrar documentales respecto a la denunciante.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
66	Martín Dueñas Ortiz	20/12/2017 ³⁵⁵	Estatus actual: Afiliado Alta 28/09/2010	Estatus actual: Afiliado. Escrito de 29/01/2018. ³⁵⁶ Informó que no ha sido posible encontrar documentales respecto al denunciante.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
67	Baldomero Cota Montaño	18/12/2017 ³⁵⁷	Estatus actual: Afiliado Alta 05/07/2008	Estatus actual: Afiliado. Escrito de 29/01/2018. ³⁵⁸ Informó que no ha sido posible encontrar documentales respecto al denunciante.

³⁵³ Visible a página 656 del expediente.

³⁵⁴ Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

³⁵⁵ Visible a página 666 del expediente.

³⁵⁶ Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

³⁵⁷ Visible a páginas 670-671 del expediente.

³⁵⁸ Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
68	Erika Susana González Franco	06/12/2017 ³⁵⁹	Estatus actual: Afiliada Alta 06/05/2014	Estatus actual: Afiliado. Escrito de 29/01/2018. ³⁶⁰ Informó que no ha sido posible encontrar documentales respecto a la denunciante.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
69	Nora Graciela Reveles Castañeda	20/12/2017 ³⁶¹	Estatus actual: Afiliada Alta 05/03/2015	Estatus actual: Afiliado. Escrito de 29/01/2018. ³⁶² Informó que no ha sido posible encontrar documentales respecto a la denunciante.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

³⁵⁹ Visible a página 677 del expediente.

³⁶⁰ Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

³⁶¹ Visible a páginas 681-682 del expediente.

³⁶² Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
70	María Elena Galván Álvarez	18/12/2017 ³⁶³	Estatus actual: No afiliada Alta 05/12/2013 Cancelación 19/12/2017	Estatus actual: No afiliado. Afiliada en 2013 Escrito de 20/12/2017, por medio del cual le notifican a la quejosa que fue dada de baja del padrón de afiliados del PT. ³⁶⁴

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.

Además, si bien el PT aportó documentales para, a su parecer, acreditar la afiliación, lo cierto es que se trata de documentos internos emitidos por dicho partido político las cuales, en ningún caso, acreditan una debida afiliación.

Es por ello que la conclusión debe ser que **SÍ** se trata de una **afiliación indebida**.

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
71	Rosa Ícela Bustamante Coronel	19/12/2017 ³⁶⁵	Estatus actual: Afiliada Alta 16/12/2013	Estatus actual: Afiliado. Escrito de 29/01/2018. ³⁶⁶ Informó que no ha sido posible encontrar documentales respecto a la denunciante.

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.

Es por ello que la conclusión debe ser que **SÍ** se trata de una **afiliación indebida**.

³⁶³ Visible a página 688 del expediente.

³⁶⁴ Visible a páginas 1547-1548 del expediente.

³⁶⁵ Visible a página 711 del expediente.

³⁶⁶ Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
72	Mónica Damiana Leyva Buitimea	18/12/2017 ³⁶⁷	Estatus actual: Afiliada Alta 25/11/2013	Estatus actual: Afiliado. Escrito de 29/01/2018. ³⁶⁸ Informó que no ha sido posible encontrar documentales respecto a la denunciante.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
73	Raquel Salazar Flores	21/12/2017 ³⁶⁹	Estatus actual: Afiliada Alta 17/11/2011	Estatus actual: Afiliado. Escrito de 29/01/2018. ³⁷⁰ Informó que no ha sido posible encontrar documentales respecto a la denunciante.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
74	Juan Carlos Meza Viveros	21/12/2017 ³⁷¹	Estatus actual: Afiliado Alta 13/07/2010	Estatus actual: Afiliado. Escrito de 29/01/2018. ³⁷² Informó que no ha sido posible encontrar documentales respecto al denunciante.

³⁶⁷ Visible a página 715 del expediente.

³⁶⁸ Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

³⁶⁹ Visible a página 721 del expediente.

³⁷⁰ Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

³⁷¹ Visible a página 725 del expediente.

³⁷² Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
75	Jorge Alfredo López Manzanares	22/12/2017 ³⁷³	Estatus actual: No afiliado Alta 29/01/2009 Cancelación 08/01/2018	Estatus actual: No afiliado. Afiliado en 2009 Oficio REP-PT-INE-PVG-007/2018. ³⁷⁴ Remitió copia certificada del escrito de 22 de diciembre de 2017, por el cual le informan al ciudadano que fue dado de baja del padrón de afiliados del PT. ³⁷⁵
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Además, si bien el PT aportó documentales para, a su parecer, acreditar la afiliación, lo cierto es que se trata de documentos internos emitidos por dicho partido político las cuales, en ningún caso, acreditan una debida afiliación.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
76	Guadalupe Alejandra Fregoso	20/12/2017 ³⁷⁶	Estatus actual: Afiliada Alta 23/06/2008	Estatus actual: Afiliado. Escrito de 29/01/2018. ³⁷⁷ Informó que no ha sido posible encontrar

³⁷³ Visible a página 730 del expediente.

³⁷⁴ Visible a páginas 1193-1194 del expediente.

³⁷⁵ Visible a páginas 1204-1205 del expediente.

³⁷⁶ Visible a página 737 del expediente.

³⁷⁷ Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
				documentales respecto a la denunciante.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida..</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
77	Juan Antonio Meléndez Hernández	14/12/2017 ³⁷⁸	Estatus actual: Afiliado Alta 07/11/2011	Estatus actual: Afiliado. Oficios REP-PT-INE-PVG-024/2018, ³⁷⁹ y REP-PT-INE-PVG-024/2018 ³⁸⁰ Remitió copia certificada del formato de afiliación. ³⁸¹
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que el denunciante es afiliado al PT.</p> <p>El PT aportó copia certificada del formato de afiliación de Juan Antonio Meléndez Hernández.</p> <p>Es importante referir que el ciudadano en cuestión al dar contestación a la vista de alegatos³⁸² manifestó, esencialmente, que...<i>el coordinador del Partido en cuestión creo un Comité Ciudadano, ofreciendo apoyos a colonos de ciertos sectores, argumentando que quienes fueran beneficiados no estarían ligados ni comprometidos de ninguna forma con el Partido del Trabajo, por lo cual no existiría afiliación alguna a dicho partido político.</i></p> <p>No obstante, lo anterior, como se señaló, el escrito en mención no es el único documento signado por el ciudadano en el que hace manifiesta su afiliación al PT, sino que, además, obra la cédula de afiliación respectiva, misma que no fue controvertida por el denunciante.</p> <p>Además, cabe precisar que, al dar contestación a la vista de alegatos, el denunciante no contravirtió el contenido de las documentales aportadas por el PT, habida cuenta que con tales constancias se le corrió traslado, a efecto de que se pronunciara al respecto en la etapa de alegatos, sin que objetara su autenticidad,</p>				

³⁷⁸ Visible a página 745 del expediente.

³⁷⁹ Visible a páginas 1627-1629 del expediente.

³⁸⁰ Visible a páginas 1663 1664 del expediente.

³⁸¹ Visible a página 1738 del expediente.

³⁸² Visible a páginas 2053-2054 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
<p>así como tampoco su alcance y valor probatorio; lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de Quejas.</p> <p>Con base en lo expuesto, la existencia del referido documento, no es un hecho controvertido, al cual debe concederse el valor y eficacia probatoria plena.</p> <p>No pasa inadvertido que el quejoso manifestó que se le ofreció un apoyo, sin especificar de qué tipo, sin embargo, no precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que supuestamente se llevó a cabo el hecho que hace del conocimiento de esta autoridad electoral, ni tampoco presentó algún medio de prueba para corroborar su dicho.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que NO se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
78	Julio Iván Medina Martínez	19/12/2017 ³⁸³	Estatus actual: No afiliado Alta 16/01/2014 Cancelación 28/12/2017	Estatus actual: No afiliado. 2014 Escrito de 21/12/2017, por el cual le notifican al quejoso que fue dado de baja del padrón de afiliados del PT. ³⁸⁴
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Además, si bien el PT aportó documentales para, a su parecer, acreditar la afiliación, lo cierto es que se trata de documentos internos emitidos por dicho partido político las cuales, en ningún caso, acreditan una debida afiliación.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
79	Mikhail Tolentino Jiménez	08/12/2017 ³⁸⁵	Estatus actual: No afiliado Alta 15/12/2013 Cancelación 08/01/2018	Estatus actual: No afiliado. Afiliado en 2013

³⁸³ Visible a página 750 del expediente.

³⁸⁴ Visible a páginas 1551-1552 del expediente.

³⁸⁵ Visible a página 760 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
				Oficio REP-PT-INE-PVG-007/2018. ³⁸⁶ Remitió copia certificada del escrito de 22 de diciembre de 2017, por el cual le informan al ciudadano que fue dado de baja del padrón de afiliados del PT. ³⁸⁷

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.

Además, si bien el PT aportó documentales para, a su parecer, acreditar la afiliación, lo cierto es que se trata de documentos internos emitidos por dicho partido político las cuales, en ningún caso, acreditan una debida afiliación.

Es por ello que la conclusión debe ser que **SÍ** se trata de una **afiliación indebida**.

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
80	Josefina Jiménez Jiménez	08/12/2017 ³⁸⁸	Estatus actual: No afiliada Alta 05/12/2014 Cancelación 08/01/2018	Estatus actual: No afiliado. Afiliada en 2014 Oficio REP-PT-INE-PVG-007/2018. ³⁸⁹ Remitió copia certificada del formato de afiliación, credencial de afiliada al PT y del escrito de 22 de diciembre de 2017, por medio del cual le informan a la ciudadana que fue dada de baja del padrón de afiliados. ³⁹⁰

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue debidamente afiliada al PT.

El PT aportó copia certificada de cédula de afiliación de la ciudadana en la que, además, se aprecia la credencial de afiliada de dicho instituto político con los datos siguientes: nombre, domicilio, folio, clave de elector, firma, huella y fotografía, con fecha de emisión 15/02/2014, sin que estas hayan sido objetadas o

³⁸⁶ Visible a páginas 1193-1194 del expediente.

³⁸⁷ Visible a páginas 1206-1207 del expediente.

³⁸⁸ Visible a página 764 del expediente.

³⁸⁹ Visible a páginas 1193-1194 del expediente.

³⁹⁰ Visible a páginas 1210-1213 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
controvertidas por la quejosa, al no dar contestación a la vista que le fue formulada con las constancias atinentes, sobre la cual no se pronunció.				
En consecuencia, la conclusión debe ser que NO se trata de una afiliación indebida.				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
81	Cristóbal Hernández Mercado	20/12/2017 ³⁹¹	Estatus actual: Afiliado Alta 08/01/2015	Estatus actual: Afiliado. Escrito de 29/01/2018. ³⁹² Informó que no ha sido posible encontrar documentales respecto al denunciante.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
83	Beatriz Hernández Bello	19/12/2017 ³⁹³	Estatus actual: Afiliada Alta 01/07/2008	Estatus actual: Afiliado. Escrito de 29/01/2018. ³⁹⁴ Informó que no ha sido posible encontrar documentales respecto a la denunciante.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>				

³⁹¹ Visible a páginas 767-768 del expediente.

³⁹² Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

³⁹³ Visible a página 859 del expediente.

³⁹⁴ Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
84	Víctor Manuel Álvarez Martínez	27/12/2017 ³⁹⁵	Estatus actual: Afiliado Alta 27/09/2010	Estatus actual: Afiliado. Afiliado en 2010 Oficio REP-PT-INE-PVG-043/2018. ³⁹⁶ Remitió copia certificada de la solicitud del quejoso de baja del padrón de afiliados del PT. ³⁹⁷

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que el denunciante es afiliado al PT.

Es importante precisar que obra en el presente asunto copia certificada de escrito signado³⁹⁸ por Víctor Manuel Álvarez Martínez, dirigido tanto al PT en el estado de Veracruz como al INE, en el que, esencialmente, manifestó: *Por medio del presente documento vengo a reconocer que fue mi voluntad de manera libre, sin coacción ni violencia afiliarme al Partido del Trabajo en 2010, por lo que desde este momento reconozco que si me afilie al Partido del Trabajo en el año que comento.*

Además, si bien el quejoso, en la misma temporalidad, presentó tanto su escrito de queja por afiliación indebida como el escrito dirigido al PT solicitando su renuncia a dicho instituto político, se considera que debe prevalecer este último.

Lo anterior, se considera así, porque en caso de que el ciudadano efectivamente hubiera tenido una inconformidad con el partido político denunciado al haber sido registrada, según su dicho, en contra de su voluntad y de forma indebida en el padrón de militantes del PT, para lo cual, además, utilizaron indebidamente sus datos personales, debió presentar ante ese instituto político una solicitud de desafiliación, haciendo patente su desaprobación por el multicitado registro, circunstancia que no aconteció, ya que con pleno conocimiento de su afiliación firmó una carta de renuncia a la militancia, en la que reconoce su voluntad de afiliarse de forma libre y sin coacción.

El PT aportó tal documentación, sin que esta haya sido objetada o controvertida por el quejoso, al no dar contestación a la vista que le fue formulada con las constancias atinentes, sobre la cual no se pronunció.

Es por ello que la conclusión debe ser que **NO se trata de una afiliación indebida.**

³⁹⁵ Visible a página 869 del expediente.

³⁹⁶ Visible a páginas 1723-1725 del expediente.

³⁹⁷ Visible a páginas 1730-1731 del expediente.

³⁹⁸ Visible a página 1732 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
85	María Guadalupe Oliva Fernández	20/12/2017 ³⁹⁹	Estatus actual: Afiliada Alta 05/11/2014	Estatus actual: Afiliado. Afiliada en 2014 Escrito de 29/01/2018. ⁴⁰⁰ Remitió copia certificada del formato de afiliación de la quejosa. ⁴⁰¹

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, no existe controversia en el sentido de que la denunciante se afilió al PT.

Debe tenerse en cuenta que el PT aportó copia certificada de cédula de afiliación de la ciudadana, y está al dar contestación a la vista para formular alegatos,⁴⁰² manifestó que *...me pidieron copia de mi credencial para votar y nos pidieron que firmáramos un documento, según era para la despena que nos darían.*

Como se advierte, al dar contestación a la vista de alegatos, la denunciante no contravirtió el contenido de las documentales aportadas por el PT, habida cuenta que con tales constancias se le corrió traslado, a efecto de que se pronunciara al respecto en la etapa de alegatos, sin que objetara su autenticidad, así como tampoco su alcance y valor probatorio; lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de Quejas.

Con base en lo expuesto, la existencia del referido documento, no es un hecho controvertido, al cual debe concederse el valor y eficacia probatoria plena.

No pasa inadvertido que la quejosa manifestó que se le ofreció un apoyo consistente en la entrega de una despena, sin embargo, no precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que supuestamente se llevó a cabo el hecho que hace del conocimiento de esta autoridad electoral, ni tampoco presentó algún medio de prueba para corroborar su dicho.

En consecuencia, la conclusión debe ser que **NO se trata de una afiliación indebida.**

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
86	Verónica Tenorio González	03/01/2018 ⁴⁰³	Estatus actual: Afiliada Alta 22/03/2013	Estatus actual: Afiliado. Escrito de 29/01/2018. ⁴⁰⁴ Informó que no ha sido posible encontrar documentales respecto a la denunciante.

³⁹⁹ Visible a páginas 887-888 del expediente.

⁴⁰⁰ Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

⁴⁰¹ Visible a páginas 1443-1444 del expediente.

⁴⁰² Visible a página 2230 del expediente.

⁴⁰³ Visible a página 890 del expediente.

⁴⁰⁴ Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
87	Beatriz Chávez Flores	20/12/2017 ⁴⁰⁵	Estatus actual: Afiliada Alta 04/07/2008	Estatus actual: Afiliado. Oficio REP-PT-INE-PVG-007/2018. ⁴⁰⁶ Remitió copia certificada del formato de afiliación. ⁴⁰⁷
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante es afiliada al PT.</p> <p>El PT aportó copia certificada del formato de afiliación de Beatriz Chávez Flores.</p> <p>Es importante referir que la ciudadana en cuestión al dar contestación a la vista de alegatos⁴⁰⁸ manifestó, esencialmente, que...<i>hago de su conocimiento mi inconformidad por el hecho de haberme afiliado al partido PT, como su militante, cuestión que yo no hice de manera voluntaria. Siguiendo el proceso doy y hago constar el hecho de que no autorice para que me dieran de alta en su partido.</i></p> <p>No obstante, lo anterior, como se señaló, obra copia certificada de la cédula de afiliación de la ciudadana, misma que no fue controvertida por la denunciante.</p> <p>Esto es, al dar contestación a la vista de alegatos, la denunciante no controvertió el contenido de las documentales aportadas por el PT, habida cuenta que con tales constancias se le corrió traslado, a efecto de que se pronunciara al respecto en la etapa de alegatos, sin que objetara su autenticidad, así como tampoco su alcance y valor probatorio; lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de Quejas.</p> <p>Con base en lo expuesto, la existencia del referido documento, no es un hecho controvertido, al cual debe concederse el valor y eficacia probatoria plena.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que NO se trata de una afiliación indebida.</p>				

⁴⁰⁵ Visible a páginas 942-943 del expediente.

⁴⁰⁶ Visible a páginas 1193-1194 del expediente.

⁴⁰⁷ Visible a página 1196 del expediente.

⁴⁰⁸ Visible a página 1929 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
88	Zacarías Victoriano Chino	04/01/2018 ⁴⁰⁹	Estatus actual: Afiliado Alta 30/09/2014	Estatus actual: Afiliado. Afiliado en 2014 Escrito de 29/01/2018. ⁴¹⁰ Remitió copia certificada de formato de afiliación y carta renuncia de afiliación partidaria al PT. ⁴¹¹

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, no existe controversia en el sentido de que el denunciante está afiliado al PT.

El PT aportó copia certificada de cédula de afiliación del ciudadano de dos mil catorce, así como carta de renuncia de afiliación partidaria de veintiocho de septiembre de dos mil catorce, en la que se asentó: *Que con esta fecha renunció a todas y cada una de las afiliaciones hechas con anterioridad a los partidos políticos existentes en México, dejando vigente a partir de esta fecha la afiliación realizada al Partido del Trabajo, por así convenir a mis intereses políticos y ciudadanos...*, sin que estas hayan sido objetadas o controvertidas por el quejoso, al no dar contestación a la vista que le fue formulada con las constancias atinentes, sobre la cual no se pronunció.

En consecuencia, la conclusión debe ser que **NO se trata de una afiliación indebida.**

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
89	Víctor Manuel Sánchez Rodríguez	20/12/2017 ⁴¹²	Estatus actual: Afiliado Alta 16/04/2009	Estatus actual: Afiliado. Afiliado en 2009 Oficio REP-PT-INE-PVG-007/2018. ⁴¹³ Remitió copia certificada del formato de afiliación. ⁴¹⁴

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, no existe controversia en el sentido de que el denunciante está afiliado al PT.

El PT aportó copia certificada de cédula de afiliación del ciudadano, sin que esta haya sido objetada o controvertida por el quejoso, al no dar contestación a la vista que le fue formulada con las constancias atinentes, sobre la cual no se pronunció.

⁴⁰⁹ Visible a página 950 del expediente.

⁴¹⁰ Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

⁴¹¹ Visible a páginas 1454-1456 del expediente.

⁴¹² Visible a página 957 del expediente.

⁴¹³ Visible a páginas 1193-1194 del expediente.

⁴¹⁴ Visible a página 1197 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
En consecuencia, la conclusión debe ser que NO se trata de una afiliación indebida.				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
90	Juan Carlos Santana Sánchez	08/01/2018 ⁴¹⁵	Estatus actual: Afiliado Alta 25/01/2014	Estatus actual: Afiliado. Escrito de 29/01/2018. ⁴¹⁶ Informó que están en búsqueda de las documentales respecto al denunciante.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>En vía de alegatos⁴¹⁷ el ciudadano solicitó su baja de militante del PT, al desconocer su afiliación a dicho instituto político.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
91	Cirenia Segundo Barrios	08/01/2018 ⁴¹⁸	Estatus actual: Afiliada Alta 27/01/2014	Estatus actual: Afiliado. Escrito de 29/01/2018. ⁴¹⁹ Informó que están en búsqueda de las documentales respecto a la denunciante.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue militante del PT. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>				

⁴¹⁵ Visible a página 1133 del expediente.

⁴¹⁶ Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

⁴¹⁷ Visible a página 1979 del expediente.

⁴¹⁸ Visible a página 1134 del expediente.

⁴¹⁹ Visible a páginas 1432-1438 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

Las conclusiones anteriores, se sintetizan en los siguientes cuadros:

SESENTA Y UN CIUDADANOS

CIUDADANOS AFILIADOS INDEBIDAMENTE	
2	Elizabeth Jiménez Avellaneda
5	Flor Alicia Duarte Aguilar
8	Juan Carlos Salcido Álvarez
11	José Francisco Obregón Martínez
17	Karla Mariela Carlón Millanes
19	Miriam Ortiz Chamorro
21	Mario Armando Pamas Reyna
23	José Refugio Tagle Payán
27	Brandon Hernández Vázquez
30	Florentino Yectli Solís
34	Erika Jiménez Rueda
36	Jesús Alberto Meráz Navarrete
41	Víctor Ignacio González Legarda
44	Silvia Aguilar Córdova
48	María Yanelly Palmas Iñiguez
50	Rosario Gómez Ruiz
54	Rigoberto Segura Solís.
56	Elvia de la Cruz Acosta
58	Jaqueline Alfaro Jiménez
60	Samuel Evaristo Tapia Rubio
63	Dionisio Fernández Hernández
65	María Natividad Ruiz Meza
67	Baldomero Cota Montaña
69	Nora Graciela Reveles Castañeda
71	Rosa Ícela Bustamante Coronel
73	Raquel Salazar Flores
75	Jorge Alfredo López Manzanares
78	Julio Iván Medina Martínez
81	Cristóbal Hernández Mercado
86	Verónica Tenorio González
91	Cirenia Segundo Barrios

CIUDADANOS AFILIADOS INDEBIDAMENTE	
4	Jovana Berenice Castañeda Báez
7	Karina Rosales Melquiades
9	Amada Dávalos Candelario
15	María de Jesús Huerta González
18	Irais Jacqueline Gálvez Botello
20	Alma Gabriela Ríos Sánchez
22	Anallely Hernández Hernández
24	Juan Arroyo Mendoza
29	Araceli Jiménez Díaz
32	Elvira Fernández Cornejo
35	Rosa Argentina Guadarrama Rosales
38	María Guadalupe Vargas Durán
42	Ariana Itzel Linares Sánchez
47	Elena Orta Flores
49	Leonel Efrén Luque González
51	Ma. Guadalupe García Llamas
55	Rogelio Díaz Saavedra
57	María del Rosario Román Antúnez.
59	Ma. Anita Gutiérrez Rodríguez
62	Graciela Marina Rivera Zamudio
64	Alicia Sánchez Flores
66	Martín Dueñas Ortiz
68	Erika Susana González Franco
70	María Elena Galván Álvarez
72	Mónica Damiana Leyva Buitimea
74	Juan Carlos Meza Viveros
76	Guadalupe Alejandra Fregoso
79	Mikhail Tolentino Jiménez
83	Beatriz Hernández Bello
90	Juan Carlos Santana Sánchez

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

VEINTISIETE CIUDADANOS

CIUDADANOS AFILIADOS DEBIDAMENTE	
1	Carlos Eduardo Alemán Leal
10	Francisca Evelia Ocampo Nava
13	Elena Ramírez Guerrero
16	Humbetto Guillén Tamayo
26	Alejandra García Hernández
31	Yessica Bárcenas Benítez
37	Ariana María Domínguez Cenicerós
40	Diana García Mejía
45	Juan Carlos Mora García
52	Aurora Reyes Mejía
77	Juan Antonio Meléndez Hernández
84	Víctor Manuel Álvarez Martínez
87	Beatriz Chávez Flores
89	Víctor Manuel Sánchez Rodríguez

CIUDADANOS AFILIADOS DEBIDAMENTE	
3	Adriana Pérez Gómez
12	Verónica Zaleta Chávez
14	Nubia Selene Alejo Pascacio
25	Claudia Yuridia Terrazas Abarca
28	Richard Wilder Zenteno Grajales
33	Oliver Juamat Gómez León
39	Georgina Edith López Sosa
43	Rosa Elena González Alemán
46	Gilberta Casilda Vázquez Álvarez
61	Perla Azenet García Garza
80	Josefina Jiménez Jiménez
85	María Guadalupe Oliva Fernández
88	Zacarías Victoriano Chino

Por lo que hace a las constancias aportadas por la *DEPPP*, al ser documentos emitidos por autoridades dentro del ámbito de sus facultades, se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del *Reglamento de Quejas*, mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la *LGIPE* y 27, párrafo 2 del Reglamento citado; por tanto, tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

En el mismo tenor, las documentales allegadas al expediente por el partido político denunciado, así como por los denunciantes, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracción II del *Reglamento de Quejas*; por lo que, por si mismas, carecen de valor probatorio pleno, y sólo alcanzarán ese grado cuando, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, generen convicción en este *Consejo General* sobre la veracidad de los hechos a que se refieren, ello al tenor de lo preceptuado en los artículos 462, párrafo 3 de la *LGIPE*, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención.

5. CASO CONCRETO

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por los quejosos, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5 del *COFIPE*, cuyo contenido se replica en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; esto es, partido político, candidato o inclusive cualquier persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

Ahora bien, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, la autoridad debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento

de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

En principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento que formula en contra de la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde al quejoso.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 de la *LGIE*.

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que contaba con el consentimiento de los quejosos para afiliarlos a su partido político, y no a los ciudadanos que negaron haber solicitado su inclusión en el padrón de militantes del PT.

Así, como vimos, en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, está demostrado a partir de la información proporcionada por la DEPPP que los ciudadanos denunciados se encontraron, en ese momento, como afiliados del PT.

Por otra parte, el PT no demuestra con medios de prueba, que la afiliación respectiva sea el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de los ciudadanos, en los cuales, ellos mismos, *motu proprio*, expresaron su consentimiento y, por ende, proporcionaron sus datos personales a fin de llevar a cabo la afiliación a dicho instituto político.

Debiendo precisar que la carga de la prueba corresponde al *PT*, en tanto que el dicho de los actores consiste en demostrar que no dieron su consentimiento para ser afiliados, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba.

En tanto que los partidos políticos, cuya defensa consiste básicamente en afirmar que sí cumplieron las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación, tienen el deber de probar esa situación.

Ahora bien, tal y como quedó de manifiesto en el apartado del *MARCO NORMATIVO* de la presente Resolución, así como en el correspondiente a *CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE AFILIACIÓN INDEBIDA A UN PARTIDO POLÍTICO*, la libertad de afiliación en materia político-electoral, es un derecho reconocido y así garantizado para todo ciudadano de nuestro país, al menos desde hace varias décadas, tanto a nivel constitucional como legal, el cual es concebido como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido político, permanecer afiliado a éste, desafiliarse e, incluso, no pertenecer a ninguno. Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección de datos personales e información relacionada con la vida privada de las personas, es igualmente un derecho con una trayectoria de protección por demás lejana.

En este sentido, es pertinente dejar en claro que la garantía y protección a los citados derechos, evidentemente no deriva de disposiciones reglamentarias al interior de los institutos políticos, que prevean como obligación del partido político, la conservación de los expedientes de afiliación de cada miembro, ni tampoco a partir de la emisión de los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, emitidos por el propio INE en la Resolución CG617/2012, sino que, como se vio, el derecho tutelado deviene de disposiciones de rango supremo, el cual debe ser tutelado en todo momento, y no a partir de normas internas o reglamentarias que así lo establezcan.

En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos políticos es un derecho de los ciudadanos previsto como garantía constitucional en nuestro país desde hace décadas, también lo es la obligación de los partidos

políticos de preservar, y en su caso, de demostrar, en todo momento, que cualquier acto que engendre la voluntad de un ciudadano para formar parte en las filas de un instituto político, esté amparado en el o los documentos que demuestren indefectiblemente el acto previo del consentimiento, siendo **ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no se tiene o tenía el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes.**

Lo anterior, porque, como se mencionó, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que, de manera insuperable, el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En este sentido, toda vez que los denunciantes manifiestan no haber otorgado su consentimiento, que su afiliación se comprobó por la autoridad electoral competente, y que el *PT*, no cumplió su carga para demostrar que la afiliación sí se solicitó voluntariamente; esta autoridad electoral considera que existe una vulneración al derecho de afiliación de los quejosos y que, intrínsecamente, para la configuración de esa falta utilizaron sin autorización sus datos personales, lo cual, debe ser considerado por esta autoridad para la imposición de la sanción que, en cada caso, amerite.

Así, el estudio de fondo del presente asunto se realizará en dos apartados:

Apartado A. Ciudadanos que fueron afiliados indebidamente al *PT*

Respecto a los **sesenta y un (61) ciudadanos** que se citan en el presente apartado, el presente procedimiento sancionador ordinario es **FUNDADO** en contra del *PT*, por las razones y consideraciones siguientes:

Es importante señalar que el *PT* **reconoció la afiliación y vigencia de registro** de militancia de los treinta y dos (32) ciudadanos siguientes:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No.	Ciudadano
2	Elizabeth Jiménez Avellaneda
8	Juan Carlos Salcido Álvarez
22	Anallely Hernández Hernández
24	Juan Arroyo Mendoza
42	Ariana Itzel Linares Sánchez
49	Leonel Efrén Luque González
51	Ma. Guadalupe García Llamas
55	Rogelio Díaz Saavedra
59	Ma. Anita Gutiérrez Rodríguez
66	Martín Dueñas Ortiz
68	Erika Susana González Franco
71	Rosa Ícela Bustamante Coronel
73	Raquel Salazar Flores
76	Guadalupe Alejandra Fregoso
83	Beatriz Hernández Bello
90	Cirenia Segundo Barrios

No.	Ciudadano
5	Flor Alicia Duarte Aguilar
21	Mario Armando Pamas Reyna
23	José Refugio Tagle Payán
30	Florentino Yectli Solís
44	Silvia Aguilar Córdova
50	Rosario Gómez Ruiz
54	Rigoberto Segura Solís.
57	María del Rosario Román Antúnez
65	María Natividad Ruiz Meza
67	Baldomero Cota Montaña
69	Nora Graciela Reveles Castañeda
72	Mónica Damiana Leyva Buitimea
74	Juan Carlos Meza Viveros
81	Cristóbal Hernández Mercado
86	Verónica Tenorio González
91	Juan Carlos Santana Sánchez

No obstante, lo anterior, en ningún caso aportó las cédulas correspondientes, a fin de acreditar ante esta autoridad que el registro de los mismos aconteció de forma libre, individual, voluntaria, personal y pacífica y que además para llevar a cabo ese trámite se cumplió con los requisitos establecidos para tal efecto en su normatividad interna.

En efecto, se considera que, en el caso, el medio de prueba esencial para acreditar la debida afiliación de esos ciudadanos es la cédula o, en su caso, cualquier otra documentación establecida en la normatividad del *PT* en materia de afiliación, en la que constará el deseo de los ciudadanos a afiliarse a ese partido político, al estar impresa de su puño y letra, el nombre, firma, domicilio y datos de identificación, circunstancia que no aconteció, tal y como se estableció en párrafos precedentes.

Respecto a los veintisiete (27) ciudadanos que se citan a continuación, el ***PT*** argumentó que, a la fecha, su registro de afiliación ha sido cancelado,⁴²⁰ para lo cual, anexó copia certificada del escrito a través del cual les hizo del conocimiento la baja del padrón de afiliados correspondiente.

No.	Ciudadano
4	Jovana Berenice Castañeda Báez
11	José Francisco Obregón Martínez

No.	Ciudadano
7	Karina Rosales Melquiades
15	María de Jesús Huerta González

⁴²⁰ Salvo el caso de María Guadalupe Vargas Durán, ya que el *PT* informó que se encuentra en proceso de desafiliación.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No.	Ciudadano	No.	Ciudadano
18	Irais Jacqueline Gálvez Botello	19	Miriam Ortiz Chamorro
20	Alma Gabriela Ríos Sánchez	27	Brandon Hernández Vázquez
29	Araceli Jiménez Díaz	32	Elvira Fernández Cornejo
34	Erika Jiménez Rueda	35	Rosa Argentina Guadarrama Rosales
36	Jesús Alberto Meráz Navarrete	38	María Guadalupe Vargas Durán
41	Víctor Ignacio González Legarda	47	Elena Orta Flores
48	María Yanelly Palmas Iñiguez	56	Elvia de la Cruz Acosta
58	Jaqueline Alfaro Jiménez	60	Samuel Evaristo Tapia Rubio
62	Graciela Marina Rivera Zamudio	63	Dionisio Fernández Hernández
64	Alicia Sánchez Flores	70	María Elena Galván Álvarez
75	Jorge Alfredo López Manzanares	78	Julio Iván Medina Martínez
79	Mikhail Tolentino Jiménez		

Es decir, el *PT* reconoce la afiliación de los ciudadanos en cita, esto es, existe una confesional por parte de dicho instituto político que cobra relevancia al caso, porque corrobora de una manera indirecta que los ciudadanos fueron registrados como afiliados del partido político denunciado.

Sin embargo, el partido político denunciado manifestó que, en su mayoría, atento a la solicitud de los ciudadanos de darlos de baja de su padrón, procedió a llevar a cabo el procedimiento de desafiliación correspondiente, es por ello que, al momento, su registro ha sido cancelado o, en un caso, en proceso de desafiliación.

No obstante, lo anterior, dicho argumento resulta ser intrascendente en el presente asunto, ya que en ningún caso el *PT* aportó la documentación que acredite la afiliación libre, individual, voluntaria, personal y pacífica de tales sujetos, en los términos establecidos en su normatividad interna.

Es decir, el registro de esos veintisiete (27) ciudadanos por parte del *PT* en su padrón de militantes no esta controvertida, ni tampoco la circunstancia de que, a la fecha, sigan manteniendo o no su registro en dicho instituto político, sino lo que, en el caso se debe determinar si esa afiliación se llevó a cabo o no de forma libre, individual, voluntaria, personal y pacífica.

Sobre esto último, como se ha establecido, se considera que la cédula o solicitud de afiliación es el documento idóneo para acreditar la libre afiliación, lo cual no fue acreditado por el *PT*, no obstante, los diversos requerimientos de información que se le formularon durante la sustanciación del presente asunto.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

Ahora bien, por lo que hace a los dos (2) ciudadanos que se refieren a continuación, el *PT* manifestó que no son sus afiliados:

No.	Ciudadano	No.	Ciudadano
9	Amada Dávalos Candelario	17	Karla Mariela Carlón Millanes

No obstante, lo anterior, de las diligencias de investigación practicadas en el presente procedimiento, se advierte que la *DEPPP*, órgano central del *INE* encargado de la concentración de los padrones de los diversos partidos nacionales, así como de la verificación de los mismos, encontró a esas dos ciudadanas, registradas como militantes del *PT*.

De igual forma, es importante señalar que al contar con la información antes referida se requirió al *PT* para que proporcionara la documentación correspondiente, entre otros, a los **sesenta y un (61) ciudadanos** objeto de pronunciamiento en el presente apartado, sin que en ningún caso la aportara, es decir, no acredita de ninguna forma la afiliación libre, individual, voluntaria, personal y pacífica de tales sujetos, en los términos establecidos en su normatividad interna.

En mérito de lo anterior, existe evidencia que hace suponer que la afiliación a la que se refiere en este apartado, fue producto de una acción ilegal por parte del *PT*.

Por lo anterior, este órgano colegiado considera pertinente declarar **FUNDADO** el presente procedimiento, pues se concluye que el *PT* infringió las disposiciones electorales tendentes a demostrar la libre afiliación de los **sesenta y un (61) ciudadanos** antes referidos, quienes aparecieron como afiliados a dicho instituto político, por no demostrar el acto volitivo de éstos para permanecer agremiados a ese partido.

En efecto, como se demostró anteriormente, los denunciantes que aparecieron afiliados al *PT*, manifestaron que en momento alguno otorgaron su consentimiento para ello, siendo que dicho instituto político no demostró lo contrario, por lo que se actualiza la violación al derecho fundamental de libre afiliación garantizado desde la Constitución y la ley, según se expuso.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

Al respecto, es importante destacar, en lo que interesa, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada el seis de junio de dos mil dieciocho, al resolver el medio de impugnación con clave SUP-RAP 141/2018:⁴²¹

“...si los ciudadanos referidos alegaron que no dieron su consentimiento para pertenecer al partido político recurrente, implícitamente sostienen que no existe la constancia de afiliación atinente; por tanto, los ciudadanos no estaban obligados a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba tampoco son objeto de demostración los hechos negativos, salvo que envuelvan una afirmación.”⁴²²

Esto es, en el tema que nos ocupa, conforme a lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada en el medio de impugnación SUP-RAP 141/2018, la carga probatoria corresponde a los partidos políticos, en el caso al *PT*, ente político que *se encuentra obligado a demostrar que la solicitud de ingreso al partido fue voluntaria, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad o, en su caso, también tenía la posibilidad de probar sus afirmaciones a través de otros medios de prueba como lo serían documentales que justificaran la participación voluntaria de dichas personas en la vida interna del partido y con carácter de militante, como lo serían, por ejemplo, documentales que evidenciaran el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas, el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras,*⁴²³ circunstancia que, en el particular no aconteció.

Así pues, el *PT*, en los **sesenta y un (61)** casos analizados, no demostró que las afiliaciones se realizaron a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que dichos ciudadanos hayan dado su consentimiento para ser afiliados, ni mucho menos que hayan permitido o entregado datos personales para ese fin, los cuales se estiman necesarios para procesar las afiliaciones, dado que estos elementos se constituyen como insumos obligados para, en su momento, llevar a cabo una afiliación, de ahí que esto sea necesario e inescindible.

⁴²¹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0141-2018.pdf

⁴²² De conformidad con los numerales 461 de la *Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales*, en relación el diverso 441 de ese ordenamiento y 15, segundo párrafo, de la *Ley de Medios*

⁴²³ Criterio sostenido en la sentencia dictada en el medio de impugnación SUP-RAP 141/2018.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

Con base en ello, ante la negativa de los denunciantes de haberse afiliado al *PT*, correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de pruebas idóneas, que la afiliación se llevó a cabo a través de los mecanismos legales para ello, en donde constara fehacientemente la libre voluntad de los hoy promoventes, lo que no hizo, siendo que el solo hecho de aparecer en su registro electrónico es insuficiente para acreditar el ejercicio libre, personal y voluntario del derecho de afiliación a dicho instituto político.

Es decir, no basta con que los quejosos aparezcan como afiliados al *PT* en sus registros electrónicos, sino que dicho instituto político debió demostrar, con documentación soporte o pruebas idóneas, que dichas afiliaciones se realizaron de forma libre o voluntaria, o bien, que la aparición del nombre y datos de los quejosos en su padrón de militantes, fue consecuencia de un error involuntario o de alguna circunstancia diversa, pero no lo hizo.

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación al *PT* implica, además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que pudiera haber servido de base o justificación al partido político para afiliar a los ahora quejosos.

Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales, tiene íntima vinculación con la afiliación indebida de los **sesenta y un (61)** quejosos sobre los que se declara fundado el presente procedimiento, lo cual ya quedó debidamente acreditado y, como consecuencia de ello, merece la imposición de las sanciones que se determinarán en el apartado correspondiente.

Cabe referir que a similar conclusión arribó este Consejo General en la resolución INE/CG120/2018, de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/ALC/CG/39/2017, así como en la resolución INE/CG448/2018, de once de mayo de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2017, las cuales fueron

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

confirmadas por el *Tribunal Electoral* al dictar sentencia el veinticinco de abril y once de mayo de dos mil dieciocho, en los medios de impugnación con clave SUP-RAP-047/2018⁴²⁴ y SUP-RAP-137/2018,⁴²⁵ respectivamente, derivado de una falta de la misma naturaleza a la que aquí se estudia, en donde se determinó que el uso de datos personales poseía un carácter intrínseco o elemento esencial para la configuración de una afiliación indebida.

Apartado B. Ciudadanos que fueron afiliados debidamente al PT

Respecto a los **veintisiete (27) ciudadanos** que se citan a continuación, el presente procedimiento sancionador ordinario es **INFUNDADO** en contra del *PT*, conforme a los argumentos que se exponen a continuación:

CIUDADANOS AFILIADOS DEBIDAMENTE	
1	Carlos Eduardo Alemán Leal
10	Francisca Evelia Ocampo Nava
13	Elena Ramírez Guerrero
16	Humbetto Guillén Tamayo
26	Alejandra García Hernández
31	Yessica Bárcenas Benítez
37	Ariana María Domínguez Ceniceros
39	Georgina Edith López Sosa
43	Rosa Elena González Alemán
46	Gilberta Casilda Vázquez Álvarez
61	Perla Azenet García Garza
80	Josefina Jiménez Jiménez
85	María Guadalupe Oliva Fernández
88	Zacarías Victoriano Chino

CIUDADANOS AFILIADOS DEBIDAMENTE	
3	Adriana Pérez Gómez
12	Verónica Zaleta Chávez
14	Nubia Selene Alejo Pascacio
25	Claudia Yuridia Terrazas Abarca
28	Richard Wilder Zenteno Grajales
33	Oliver Juamat Gómez León
40	Diana García Mejía
45	Juan Carlos Mora García
52	Aurora Reyes Mejía
77	Juan Antonio Meléndez Hernández
84	Víctor Manuel Álvarez Martínez
87	Beatriz Chávez Flores
89	Víctor Manuel Sánchez Rodríguez

Como se señaló, debe tenerse en cuenta que el *PT* aportó copia certificada de la cédula de afiliación, escrito de reconocimiento de afiliación y/o credencial de afiliado al *PT*, a fin de demostrar la libre voluntad de todos para afiliarse a ese partido. Como consecuencia de lo anterior, mediante proveído dictado por la Unidad Técnica, en su calidad de autoridad instructora, se ordenó dar vista a las partes para que formularan los alegatos correspondientes; asimismo, se instruyó correr traslado a

⁴²⁴ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0047-2018.pdf

⁴²⁵ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0137-2018.pdf

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

cada uno de ellos con las constancias correspondientes, a fin de que, en ejercicio del derecho de contradicción que les asiste, se pronunciaran sobre las mismas.

A. EL PT APORTÓ FORMATO DE AFILIACIÓN U OTRO DOCUMENTO DE 20 CIUDADANOS

De inicio, es importante destacar que tal y como lo sostuvo la *Sala Superior* en la sentencia dictada en el medio de impugnación SUP-RAP 141/2018, *la prueba directa y que de manera idónea demuestra si una persona está afiliada voluntariamente a un partido es la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político*, siendo que, en el particular, el **PT** aportó copia certificada de **formato de afiliación** de los siguientes veinte (20) ciudadanos,⁴²⁶ sobre los que se declara infundado el presente procedimiento:

CIUDADANOS		¿FORMULÓ ALEGATOS?
1	Carlos Eduardo Alemán Leal	-----
10	Francisca Evelia Ocampo Nava	-----
25	Claudia Yuridia Terrazas Abarca	-----
28	Richard Wilder Zenteno Grajales	-----
39	Georgina Edith López Sosa	-----
43	Rosa Elena González Alemán	SÍ
52	Aurora Reyes Mejía	-----
77	Juan Antonio Meléndez Hernández	SÍ
85	María Guadalupe Oliva Fernández	SÍ
88	Zacarías Victoriano Chino	-----

CIUDADANOS		¿FORMULÓ ALEGATOS?
3	Adriana Pérez Gómez	-----
12	Verónica Zaleta Chávez	SÍ
26	Alejandra García Hernández	-----
37	Ariana María Domínguez Cenicerros	-----
40	Diana García Mejía	-----
46	Gilberta Casilda Vázquez Álvarez	SÍ
61	Perla Azenet García Garza	SÍ
80	Josefina Jiménez Jiménez	-----
87	Beatriz Chávez Flores	SÍ
89	Víctor Manuel Sánchez Rodríguez	-----

A. 1. Ciudadanos que SÍ formularon alegatos. 7 de 20

Los siguientes siete (7) ciudadanos **sí dieron contestación a la vista para formular alegatos** con las constancias aportadas por el **PT**: Verónica Zaleta Chávez, Gilberta Casilda Vázquez Álvarez, Perla Azenet García Garza, Juan Antonio Meléndez Hernández, María Guadalupe Oliva Fernández, Beatriz Chávez Flores y Rosa Elena González Alemán, lo anterior, conforme a lo siguiente:

⁴²⁶ En algunos casos, como se detalla en el apartado respectivo, el **PT** aportó documentación adicional al formato de afiliación.

1. Verónica Zaleta Chávez

El *PT* aportó copia certificada de la cédula de afiliación de la ciudadana, y ésta, al dar contestación a la vista para formular alegatos,⁴²⁷ manifestó, en lo que interesa, que *...si bien es cierto que se firmó una hoja, esta fue en blanco y fue para la adquisición de una despesa.*

De lo anterior, se advierte, por una parte, que la ciudadana no desconoce la firma que calza la respectiva cédula de afiliación y, por la otra, que si bien es cierto señala que firmó un documento en blanco sin saber que sería utilizado para llevar a cabo su afiliación al *PT*, también lo es que tal documental genera indicios suficientes en esta autoridad para tener por demostrada la libre afiliación de esta ciudadana al partido denunciado, habida cuenta que las manifestaciones proferidas por la quejosa a este respecto, no se encuentran sustentadas en algún medio de prueba que por sí, o bien, concatenado con las demás constancias que obran en el sumario, creen convicción en esta autoridad sobre la veracidad de su dicho.

No pasa inadvertido para esta autoridad electoral nacional el hecho de que, la ciudadana manifestó que *...firmó una hoja, esta fue en blanco y fue para la adquisición de una despesa*, sin embargo, la cuestión a dilucidar en el presente procedimiento es la afiliación debida o indebida de la ciudadana, lo que, como se refirió, fue debida.

2. Gilberta Casilda Vázquez Álvarez

El *PT* aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como cédula de afiliación del año dos mil trece, así como carta de renuncia de veintidós de diciembre de dos mil trece, signadas presuntamente por la ciudadana, sin que la denunciante, en vía de alegatos,⁴²⁸ las hubiera controvertido, ya que se limitó a referir que la fotografía que aparece en el formato de afiliación no corresponde a ella, misma, que según su dicho, esta “borrosa”, sin controvertir en sí el aludido formato de afiliación.

⁴²⁷ Visible a página 2229 del expediente.

⁴²⁸ Visible a página 2141 del expediente.

Además, como se señaló, la copia certificada de la cédula de afiliación no fue la única documental aportada por el *PT*, sino, además, obra en autos copia certificada de carta de renuncia de afiliación partidaria signado por la ciudadana en la que se asentó, en lo que interesa: *Que con esta fecha renunció a todas y cada una de las afiliaciones hechas con anterioridad a los partidos políticos existentes en México, dejando vigente a partir de esta fecha la afiliación realizada al Partido del Trabajo, por así convenir a mis intereses políticos y ciudadanos...*

Por esta razón, se estima que no le asiste la razón a la parte denunciante cuando afirma que la afiliación se llevó a cabo sin su voluntad, habida cuenta que, por una parte, existen elementos de prueba aportados por el propio partido político que demuestran la libre voluntad para afiliarse por parte de la hoy quejosa y, por la otra, las manifestaciones vertidas por quien aduce la violación reclamada no se encuentran sustentadas con medio de prueba que permitan a esta autoridad, crear convicción sobre la responsabilidad denunciada.

3. Perla Azenet García Garza

El *PT* aportó copia certificada del formato de afiliación de la ciudadana y copia de la credencial para votar de Perla Azenet García Garza.

Es importante referir que la ciudadana en cuestión al dar contestación a la vista de alegatos⁴²⁹ manifestó, esencialmente, que...*el escrito que presentó el Partido del Trabajo donde supuestamente solo se afilió a dicho partido fue llenada a partir de la credencial de elector que me fue solicitada a cambio de seguir laborando en un mercado sobre ruedas, jamás se me informó que estaría siendo afiliada a dicho partido, a lo cual a base de engaños tenía que firmar un pequeño recuadro en una hoja para una supuesta credencial que se acreditaría a la suscrita como vendedora en dicho mercado (la cual jamás se me hizo llegar), y además la fotografía que se me tomo también referente a la misma credencial para acreditar a la suscrita como vendedora; en la opción grado de estudios se manifiesta que solo es primaria, lo cual es completamente falso, anexó copia de la cedula para acreditar el grado de estudios verdadero de la suscrita.*

⁴²⁹ Visible a página 1944 del expediente.

No obstante, lo anterior, como se señaló, el escrito en mención no es el único documento signado por la ciudadana, sino que, además, obra copia certificada de la cédula de afiliación al *PT*, en la cual, como ella misma reconoce, plasmó su firma e incluso, se dejó fotografiar para una presunta credencial como vendedora.

No pasa desapercibido para esta autoridad, el hecho de que la ciudadana manifestó, en lo que interesa, que...*a base de engaños tenía que firmar*, sin embargo, la cuestión a dilucidar en el presente procedimiento es la afiliación debida o indebida de la ciudadana, lo que, como se refirió, fue debida.

4. Juan Antonio Meléndez Hernández

Por lo que hace al ciudadano en cita, éste al dar contestación a la vista de alegatos⁴³⁰ manifestó, esencialmente, que...*el coordinador del Partido en cuestión creo un Comité Ciudadano, ofreciendo apoyos a colonos de ciertos sectores, argumentando que quienes fueran beneficiados no estarían ligados ni comprometidos de ninguna forma con el Partido del Trabajo, por lo cual no existiría afiliación alguna a dicho partido político.*

No obstante, como se señaló, la copia certificada del escrito en mención no es el único documento signado por el ciudadano, que obra en autos, en el que hace manifiesta su afiliación al *PT*, sino que, además, dicho instituto político aportó copia certificada de la respectiva cédula de afiliación, la cual no contravirtió el denunciante.

Ahora bien, como se refirió, el quejoso manifestó que supuestamente ...*el coordinador del Partido en cuestión creo un Comité Ciudadano, ofreciendo apoyos*, sin embargo, la cuestión a dilucidar en el presente procedimiento es la afiliación debida o indebida de la ciudadana, lo que, como se refirió, fue debida.

⁴³⁰ Visible a páginas 2053-2054 del expediente.

5. María Guadalupe Oliva Fernández

El *PT* aportó copia certificada del formato de afiliación de María Guadalupe Oliva Fernández.

La quejosa al dar contestación a la vista de alegatos⁴³¹ manifestó, esencialmente, que...*me pidieron copia de mi credencial para votar y nos pidieron que firmáramos un documento, según era para la despena que nos darían, la cual hasta la fecha nunca nos dieron y por lo que puedo ver ahora, resultó que me afiliaron a dicho partido sin mi consentimiento.*

Como se advierte, al dar contestación a la vista de alegatos, la denunciante no controvertió el contenido de las documentales aportadas por el *PT*, sino que reconoce que firmó un documento con el objeto de obtener un beneficio consistente en la entrega de una despena.

Esto último, no pasa inadvertido para esta autoridad, sin embargo, la cuestión a dilucidar en el presente procedimiento es la afiliación debida o indebida de la ciudadana, lo que, como se refirió, fue debida.

6. Beatriz Chávez Flores

El *PT* aportó copia certificada del formato de afiliación de Beatriz Chávez Flores.

La ciudadana en cuestión al dar contestación a la vista de alegatos⁴³² manifestó, esencialmente, que...*hago de su conocimiento mi inconformidad por el hecho de haberme afiliado al partido PT, como su militante, cuestión que yo no hice de manera voluntaria. Siguiendo el proceso doy y hago constar el hecho de que no autorice para que me dieran de alta en su partido.*

No obstante, como se señaló, obra copia certificada de la cédula de afiliación de la ciudadana, misma que no fue controvertida por la denunciante, en cuanto a su contenido, de allí que no se considera como indebida su afiliación.

⁴³¹ Visible a página 2230 del expediente.

⁴³² Visible a página 1929 del expediente.

7. Rosa Elena González Alemán

Respecto de esta ciudadana, es importante indicar que durante las intervenciones procesales que tuvo el partido político denunciado, adjuntó diversos documentos a fin de demostrar la libre y voluntaria afiliación de Rosa Elena González Alemán a sus filas.

Entre los documentos aportados, destacan la copia certificada del formato de afiliación a nombre de la ciudadana a que se refiere este apartado, la cual cuenta con una firma que, en apariencia, coincide con los rasgos de aquella que aparece en su credencial para votar, así como un escrito firmado por la quejosa, también en copia certificada,⁴³³ dirigido tanto al partido político denunciado en el estado de Veracruz, como este Instituto (INE), del que, esencialmente, se desprende lo siguiente:

Por medio del presente documento vengo a reconocer que fue mi voluntad de manera libre, sin coacción ni violencia afiliarme al Partido del Trabajo en 2014, por lo que desde este momento reconozco que si me afilie al Partido del Trabajo en el año que comento.

Sobre dichas documentales, es importante destacar que una vez que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral tuvo conocimiento de la información aportada, dio vista con la misma a Rosa Elena González Alemán, a fin de que se impusiera de su contenido, hiciera las manifestaciones que a su interés conviniera y, en su caso, las objetara en términos de lo establecido en el artículo 24 del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Instituto.

Derivado de ello, mediante escrito de veintitrés de marzo del año en curso⁴³⁴, la hoy quejosa manifestó:

...una vez más el partido político denominado Partido del Trabajo se aprovechó de mi buena fe, pues en su momento le firme ese escrito solo porque manifestaron que si lo hacía mi trámite sería más ágil, por lo que desconozco el escrito en mención y me apego a mis escritos de siete y ocho de diciembre de dos mil diecisiete, así como los ratifico en todo y cada una de sus partes.

⁴³³ Visible a página 1732 del expediente.

⁴³⁴ Visible a fojas 1927 de autos

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

Con base en lo expuesto, esta autoridad concluye que el procedimiento por lo que se refiere a la ciudadana en estudio, deviene en **INFUNDADO** por las razones siguientes:

En principio, debe tenerse presente que, como se dijo párrafos arriba, el partido político denunciado aportó copia certificada de la cédula de afiliación correspondiente a la hoy denunciante, con el propósito de hacer frente a las manifestaciones vertidas por la quejosa respecto de su presunta afiliación indebida.

De dicha documental, se aprecia la firma de Rosa Elena González Alemán, la cual supone el consentimiento de ésta para ser afiliada como militante del *PT*; de ahí que, en principio, se tengan un elemento contundente de prueba para tener por demostrados los extremos aducidos por el partido político denunciado en su defensa, en el sentido de que sí medió el consentimiento previo de ésta, para ser inscrita como agremiada de ese instituto político.

Respecto a este tema, conviene tener presente que la autoridad sustanciadora, dio vista con la citada documental a la parte quejosa, a fin de que, en ejercicio de su derecho de contradicción, manifestara lo que a su interés conviniera y, en su caso, se opusiera respecto al contenido y alcances de ese documento; sin embargo, no se obtuvo respuesta o manifestación específica y particular respecto a dicha documental, en la cual se controvertiera, a manera de ejemplo, la autenticidad de la firma que ahí calzaba, o bien, algún aspecto sobre la validez del documento exhibido.

Ante ello, es innegable que la cédula de afiliación aportada, por sí misma, es suficiente para tener por acreditada la libre y voluntaria afiliación de la hoy denunciante a las filas del *PT*.

Aunado a lo anterior, cobra relevancia la prueba aportada por el partido denunciado, consistente en la copia certificada del escrito firmado por Rosa Elena González Alemán, cuyo contenido ha sido debidamente transcrito, líneas arriba.

De este elemento probatorio, se advierte el reconocimiento realizado por la denunciante, sobre su voluntad libre, sin coacción ni violencia, de afiliarse al *PT*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

desde el año 2014. Así pues, con esta probanza se refuerza nuevamente el dicho del partido denunciado, en el sentido de que, previo al registro de la ciudadana dentro de su membresía partidaria, medió su voluntad para ser afiliada, en respeto al derecho de libre asociación política, regulado en las disposiciones constitucionales relativas, así como el uso debido de sus datos personales para ese fin.

Sobre este documento, debe mencionarse que, como ya se dijo, la autoridad instructora también le corrió traslado a la denunciante, con el objeto de que se impusiera de su contenido y, en su caso, lo contravirtiera.

En respuesta a la citada vista, Rosa Elena González Alemán se limitó a referir, en síntesis, que el *PT* se aprovechó de su buena fe, toda vez que firmó el documento sólo porque le manifestaron que, con ello, su trámite de desafiliación sería más ágil, lo cual no ocurrió; desconociendo, en consecuencia, su contenido y alcances.

Las manifestaciones vertidas por la ciudadana, a consideración de quien resuelve, son insuficientes, por sí mismas, para restar eficacia y alcance probatorio a la mencionada documental, habida cuenta que, tal y como se ha mencionado, la denunciante no desconoce la firma que calza en el citado documento, por el contrario, la reconoce como propia, justificando su impresión o estampa, en un supuesto engaño del que dice fue objeto por parte del *PT*, con el propósito de agilizar un trámite de desafiliación por ella iniciado.

No obstante, la denunciante tampoco aporta algún elemento de prueba en descargo, que haga suponer la veracidad de su dicho, en términos de lo establecido en el artículo 24 del Reglamento de Quejas y Denuncias, habida cuenta que no aporta los elementos idóneos para acreditar la razón de su dicho, o que de suyo, invaliden la fuerza probatoria de la prueba objetada; de ahí que la objeción formulada, no sea suficiente para desvirtuar la documental ofrecida por el partido político en su defensa, ni restarle valor probatorio.

Aunado a lo expuesto, debe tenerse presente que, del contenido del elemento de prueba debatido, pueden advertirse frases claras como *“vengo a reconocer que fue mi voluntad de manera libre, sin coacción ni violencia afiliarme al Partido del Trabajo en 2014, así como reconozco que, si me afilie al Partido del Trabajo en el año que*

comento, las cuales, a consideración de esta autoridad, no dejan lugar a dudas respecto de sus alcances y consecuencias. Es decir, esta autoridad no observa frases veladas o sujetas a interpretación, que puedan, aún en grado de indicio, orillar a un convencimiento o, incluso, duda, sobre un posible vicio en la voluntad por parte del signante del documento.

Así las cosas, esta autoridad concluye que, en caso de haber existido algún vicio en el consentimiento por parte de Rosa Elena González Alemán para la firma del documento a que se ha hecho referencia, debió ser a cargo de ésta su demostración, en términos del principio de distribución de gravámenes procesales que establece que *el que afirma está obligado a probar*, recogido en nuestro sistema jurídico mexicano y, por ende, a la materia electoral; lo cual no ocurrió.

Por estas razones, al estar debidamente demostrados los extremos aducidos por el *PT*, en sus intervenciones procesales, debe declararse **INFUNDADO** el procedimiento en lo relativo a la presunta afiliación indebida y uso de datos personales de Rosa Elena González Alemán.

Finalmente, en general, es importante destacar que los ciudadanos Verónica Zaleta Chávez, Gilberta Casilda Vázquez Álvarez, Perla Azenet García Garza, Juan Antonio Meléndez Hernández, María Guadalupe Oliva Fernández y Beatriz Chávez Flores, no controvertieron el contenido de las documentales aportadas por el *PT*, habida cuenta que con tales constancias se les corrió traslado, a efecto de que se pronunciaran al respecto en la etapa de alegatos, sin que objetaran su autenticidad, así como tampoco su alcance y valor probatorio; lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de Quejas, el cual establece, en lo que interesa, lo siguiente:

“Artículo 24
De la objeción

...

2. ...las partes podrán objetar la autenticidad de la prueba o bien su alcance y valor probatorio, debiendo indicar cuál es el aspecto que no se reconoce de la prueba o porque no puede ser valorado positivamente por la autoridad, esto es, el motivo por el que a su juicio no resulta idóneo para resolver un punto de hecho.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

3. Para desvirtuar la existencia o verosimilitud de los medios probatorio ofrecidos, no basta la simple objeción forma de dichas pruebas, sino que es necesario señalar las razones concretas en que se apoya la objeción y aportar elementos idóneos para acreditarlas, mismos que tenderán a invalidar la fuerza probatoria de la prueba objetada.”

Esto es, de conformidad con el precepto reglamentario previamente transcrito, **no basta con objetar de manera formal el medio de prueba ofrecido por el partido político para desvirtuar la existencia o verosimilitud de la constancia de afiliación, sino que es necesario señalar las razones correctas en que se apoya la objeción y, también, aportar en el momento procesal oportuno, los elementos idóneos para acreditar su objeción.**

Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia 4/2005⁴³⁵ de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes:

“DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y PUEBLA, ESTA ÚLTIMA ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1998). En términos de lo dispuesto por los artículos 324 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 330 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, los documentos privados provenientes de las partes deben ser reconocidos expresa o tácitamente para que adquieran el valor probatorio que las propias legislaciones les otorgan. Ahora bien, **esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio reiterado de que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que es necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción.** Debido a que en las legislaciones adjetivas en cuestión no se establece ninguna regla específica sobre la carga probatoria en la hipótesis apuntada, para saber a quién corresponde dicha carga de la prueba sobre la objeción formulada, deben atenderse los hechos en que se funde la misma, aplicándose las reglas genéricas establecidas en los artículos 289 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 263 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, en cuanto a que **a cada parte corresponde probar los hechos de sus pretensiones. Por tanto, si la objeción de un documento privado proveniente de los interesados base de sus pretensiones se funda en la circunstancia de no haber suscrito el documento el objetante, a él corresponde la carga de la prueba.** Dicho de otra forma, **quien**

⁴³⁵ Jurisprudencia 1a./J. 4/2005, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, abril de 2005, Página 266.

invoca una situación jurídica está obligado a probar los hechos fundatorios en que aquélla descansa; por lo contrario, quien sólo quiere que las cosas se mantengan en el estado que existen en el momento en que se inicia el juicio, no tiene la carga de la prueba, pues desde el punto de vista racional y de la lógica es evidente que quien pretende innovar y cambiar una situación actual, debe soportar la carga de la prueba.”

[Énfasis añadido]

Bajo ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió, en concordancia con los preceptos invocados en líneas que anteceden, que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que debe ser necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción, es decir, que al objetante corresponde la carga de la prueba.

A efecto de robustecer lo anterior, se citan criterios de diversos Tribunales Colegiados de Circuito, en los que se han pronunciado en tal sentido sobre el tema:

- **DOCUMENTOS PRIVADOS. OBJECIÓN A LOS.**⁴³⁶
- **DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. CONFORME AL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA.**⁴³⁷
- **DOCUMENTOS PRIVADOS. PARA NEGARLES VALOR PROBATORIO, NO BASTA LA SIMPLE OBJECIÓN, SINO QUE DEBEN SEÑALARSE LAS CAUSAS EN QUE LA FUNDE Y DEMOSTRARLAS.**⁴³⁸
- **DOCUMENTOS PRIVADOS, CARGA DE LA PRUEBA EN CASO DE OBJECIÓN A LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).**⁴³⁹

⁴³⁶ Jurisprudencia I.3Oc. J/8, Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, agosto de 1996, Página 423.

⁴³⁷ Tesis Aislada XV.4o.12 C, Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, septiembre de 2009, Página 3128.

⁴³⁸ Jurisprudencia III. 1Oc. J/17, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Número 63, marzo de 1993, Página 46.

⁴³⁹ Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, agosto de 1993, Página 422.

- **DOCUMENTOS PRIVADOS. CARGA DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR LA OBJECCIÓN RESPECTO DE LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA CONTENIDA EN ELLOS.**⁴⁴⁰
- **DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).**⁴⁴¹

De igual forma, resulta aplicable la Jurisprudencia I.3o.C. J/11⁴⁴², dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes:

“DOCUMENTOS PRIVADOS INSUFICIENTEMENTE OBJETADOS POR EL PROPIO FIRMANTE, VALOR PROBATORIO DE LOS. En tratándose de documentos privados, debe hacerse la distinción entre aquellos que provienen de terceras personas y los que se atribuyen a las partes litigantes en la controversia. Respecto de los primeros, basta la objeción del instrumento privado, debidamente razonada, para que pierda su valor probatorio, quedando a cargo del oferente la carga de la prueba y apoyar su contenido aportando otros elementos de convicción, y en relación con el segundo supuesto, para tener por satisfecho lo dispuesto por el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es menester que **la parte a quien perjudique realice en tiempo, forma y suficiencia la objeción, para que pierda su alcance probatorio dicho instrumento. De esta manera, se tiene que si en un caso la contraparte del oferente, al dársele vista con el documento exhibido, se limitó a manifestar que no lo había firmado, tal aseveración no pudo constituir la causa suficiente de objeción que demeritara el alcance de esa probanza, ya que para tal efecto resulta indispensable que existan causas motivadoras de la invalidez de la prueba y que se aportaran las pruebas idóneas para tal fin, como pudieron ser las periciales grafoscópicas, grafológicas y caligráficas;** elementos que no se rindieron para acreditar la impugnación, como lo dispone el artículo 341 del código citado.”

[Énfasis añadido]

⁴⁴⁰ Tesis XXXI.3º 8 L, Tercer Tribunal Colegiado de Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, abril de 2002, Página 1254.

⁴⁴¹ Tesis II. o C, 495 C, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, septiembre de 2005, Página 1454.

⁴⁴² Tesis I.3o. C J/11, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre de 1997, Página 615.

En igual sentido, el Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito en la Jurisprudencia III.1o.C. J/29⁴⁴³, sostuvo el referido criterio en el siguiente sentido:

“DOCUMENTOS PRIVADOS, PRUEBA DE LA FALSEDAD DE LA FIRMA DE LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Una interpretación armónica de los artículos 342, 343, 344, 345, 346 y 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, lleva a concluir que cuando **se objeta la autenticidad de la firma de un documento privado es necesario pedir el cotejo de la misma con una señalada como indubitable; además, debe ofrecerse la prueba pericial respectiva, dado que la falsificación de la firma es un punto que sólo puede ser determinado por una persona con conocimientos especiales en la materia, es decir, por un perito grafógrafo, aun cuando exista diferencia notoria entre las firmas cuestionadas, porque tal circunstancia, por sí sola, no revela lo apócrifo de una de ellas, sino únicamente la diferencia entre ambas.**”

[Énfasis añadido]

Lo anterior, en suma, significa que para destruir la presunción de inocencia que surge en favor del denunciado cuando aporta elementos de prueba idóneos para demostrar que la afiliación cuestionada estuvo precedida de la manifestación de voluntad del quejoso, tal como las constancias de afiliación correspondientes, o bien, elementos que pongan de manifiesto que el quejoso realizó hechos positivos derivados de su militancia, no basta que, de manera abstracta y genérica, el quejoso afirme que dichos medios de convicción no son veraces o auténticos.

Lo anterior, atento que, conforme a la normatividad que rige los procedimientos sancionadores electorales y que inexcusablemente está obligado a seguir este Consejo General, resulta imperativo que quien objeta un medio de prueba, señale específicamente cuál es la parte que cuestiona, y al efecto aporte, o cuando menos señale, conforme a la regla general relativa a que a quien afirma le corresponde probar —vigente en los procedimientos sancionadores electorales conforme a lo establecido por la Sala Superior—, los elementos objetivos y ciertos que puedan conducir a destruir la eficacia probatoria de los elementos aportados por el denunciado en su defensa, pues de otra manera, el principio de presunción de

⁴⁴³ Jurisprudencia III.1o.C. J/29, Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Página 680.

inocencia deberá prevalecer apoyado en las evidencias allegadas al procedimiento por el presunto responsable.

Con base en lo expuesto, la existencia de los referidos documentos, no es un hecho controvertido, a los cuales debe concederse el valor y eficacia probatoria plena.

A. 2. Ciudadanos que NO formularon alegatos. 13 de 20

Es importante referir que trece denunciantes fueron omisos en dar contestación a la vista para formular alegatos en el presente asunto, ciudadanos sobre los que el *PT* aportó copia certificada de su respectivo formato de afiliación y, en algunos casos, otro documento adicional para acreditar la afiliación, lo cual se desarrolla conforme a lo siguiente:

✓ Formato de afiliación

Los siguientes nueve (9) ciudadanos **no dieron contestación a la vista para formular alegatos** en el presente asunto y, por tanto, tampoco se opusieron a las constancias exhibidas por el partido para tal efecto, específicamente a la copia certificada del respectivo **formato de afiliación**, razón por la cual tales documentales debe tenerse por no objetadas o controvertidas por los quejosos en cita, sobre las cuales, cada uno de ellos, no se pronunciaron:

CIUDADANOS AFILIADOS DEBIDAMENTE	
1	Carlos Eduardo Alemán Leal
10	Francisca Evelia Ocampo Nava
37	Ariana María Domínguez Ceniceros
40	Diana García Mejía
89	Víctor Manuel Sánchez Rodríguez

CIUDADANOS AFILIADOS DEBIDAMENTE	
3	Adriana Pérez Gómez
28	Richard Wilder Zenteno Grajales
39	Georgina Edith López Sosa
52	Aurora Reyes Mejía

✓ Formato de afiliación y carta de renuncia partidaria

Los siguientes dos (2) ciudadanos **no dieron contestación a la vista para formular alegatos** en el presente asunto y, por tanto, tampoco se opusieron a las constancias exhibidas por el partido para tal efecto, específicamente a la copia certificada del respectivo **formato de afiliación, así como de la carta de renuncia**

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

partidaria, razón por la cual tales documentales deben tenerse por no objetadas o controvertidas por los quejosos, sobre las cuales, cada uno de ellos, no se pronunciaron.

CIUDADANO AFILIADOS DEBIDAMENTE	
25	Claudia Yuridia Terrazas Abarca

CIUDADANO AFILIADOS DEBIDAMENTE	
88	Zacarías Victoriano Chino

Debe precisarse que, en ambos casos, el *PT* aportó copia certificada de cédula de afiliación de los ciudadanos, así como carta de renuncia de afiliación partidaria, en la que, de manera similar, se asentó: *Que con esta fecha renunció a todas y cada una de las afiliaciones hechas con anterioridad a los partidos políticos existentes en México, dejando vigente a partir de esta fecha la afiliación realizada al **Partido del Trabajo**, por así convenir a mis intereses políticos y ciudadanos...*, documentales que no fueron objetadas o controvertidas por los quejosos, al no dar contestación a la vista que les fue formulada con las constancias atinentes.

✓ Formato de afiliación y credencial de afiliada al *PT*

Las siguientes dos (2) ciudadanas **no dieron contestación a la vista para formular alegatos** en el presente asunto y, por tanto, tampoco se opusieron a las constancias exhibidas por el partido para tal efecto, específicamente a la copia certificada del respectivo **formato de afiliación, así como de la credencial de afiliada al *PT***, razón por la cual tales documentales deben tenerse por no objetadas o controvertidas por las quejosas, sobre las cuales, cada uno de ellos, no se pronunciaron.

CIUDADANO AFILIADOS DEBIDAMENTE	
26	Alejandra García Hernández

CIUDADANO AFILIADOS DEBIDAMENTE	
80	Josefina Jiménez Jiménez

En efecto, el *PT* aportó copia certificada de cédula de afiliación de las ciudadanas, en las que, además, se aprecia la credencial de afiliada de dicho instituto político con los datos siguientes: nombre, domicilio, folio, clave de elector, firma, huella y fotografía, con fecha de emisión de la misma, sin que estas hayan sido objetadas o controvertidas por las quejosas, al no dar contestación a la vista que le fue formulada con las constancias atinentes, sobre las cuales no se pronunciaron.

B. EL PT APORTÓ ESCRITO DE RENUNCIA PARTIDARIA DE 7 CIUDADANOS

Sobre los siguientes siete (7) ciudadanos, el *PT* aportó copia certificada de escritos signados, respectivamente, por los ciudadanos quejosos, dirigidos tanto a dicho instituto político, en la entidad federativa correspondiente, como al *INE*, mediante el cual hicieron del conocimiento, esencialmente, de forma similar, lo siguiente:

Por medio del presente documento vengo a reconocer que fue mi voluntad de manera libre, sin coacción ni violencia afiliarme al Partido del Trabajo en [año], por lo que desde este momento reconozco que si me afilie al Partido del Trabajo en el año que comento.

CIUDADANOS AFILIADOS DEBIDAMENTE	
13	Elena Ramírez Guerrero
16	Humbetto Guillén Tamayo
33	Oliver Juamat Gómez León
84	Víctor Manuel Álvarez Martínez

CIUDADANOS AFILIADOS DEBIDAMENTE	
14	Nubia Selene Alejo Pascacio
31	Yessica Bárcenas Benítez
45	Juan Carlos Mora García

Al respecto, no obstante que, con las constancias atinentes, se le dio vista a los sujetos en cita para que formularan alegatos en el presente procedimiento, tales ciudadanos **no dieron contestación a la vista de mérito** y, por tanto, no se opusieron a las constancias exhibidas por el *PT*, es decir, los ciudadanos quejosos, no objetaron o controvirtieron la veracidad y contenido del escrito, según corresponda.

Por otra parte, se debe precisar que si bien los quejosos, en la misma temporalidad, presentaron, cada uno de ellos, tanto su escrito de queja por afiliación indebida como el escrito dirigido al *PT* solicitando su renuncia a dicho instituto político, se considera que debe prevalecer este último.

Lo anterior, se considera así, porque en caso de que los ciudadanos, efectivamente, hubieran tenido una inconformidad con el partido político denunciado al haber sido registrados, según su dicho, en contra de su voluntad y de forma indebida en el padrón de militantes del *PT*, para lo cual, además, utilizaron indebidamente sus datos personales, los denunciantes debieron presentar ante ese instituto político una solicitud de desafiliación, haciendo patente su desaprobación por el multicitado

registro, circunstancia que no aconteció, ya que con pleno conocimiento de su afiliación, cada uno de ellos, firmaron una carta de renuncia a la militancia, en la que reconocen su voluntad de afiliarse de forma libre, sin coacción, presión y sin violencia.

Es por ello que, al no acreditarse una acción ilegal por parte del *PT*, por lo que hace a los **veintisiete (27)** ciudadanos referidos en el presente apartado, el procedimiento sancionador ordinario es **INFUNDADO**.

CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de las faltas denunciadas, así como la responsabilidad por parte del *PT*, en los casos detallados en el considerando que antecede, procede ahora determinar la sanción correspondiente, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 355, párrafo 5 del COFIPE, cuyo contenido se reproduce en el diverso 458, párrafo 5, de la *LGIFE*, relativo a la gravedad de la responsabilidad en que se incurra; el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; y, en su caso, la reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.

En relación con ello, el *Tribunal Electoral* ha sostenido que para individualizar la sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción electoral.

1. Calificación de la falta

A. Tipo de infracción

Partido	Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
<i>PT</i>	La infracción se cometió por una	La conducta fue la afiliación	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41,

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

Partido	Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
	acción del partido político denunciado, que transgrede disposiciones de la <i>Constitución</i> , del COFIPE, en el momento de su comisión, así como de la <i>LGIPE</i> y la <i>LGPP</i> .	indebida y el uso no autorizado de los datos personales de sesenta y un (61) ciudadanos por parte del <i>PT</i> .	Base I, párrafo segundo, de la Constitución; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del COFIPE; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la <i>LGIPE</i> ; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la <i>LGPP</i> .

B. Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o prohibidas.

En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el caso concreto, se acreditó que el *PT* incluyó indebidamente en su padrón de afiliados, a los **sesenta y un (61)** ciudadanos quejosos, sin demostrar que para incorporarlos medió la voluntad de éstos de inscribirse como militantes de dicho instituto político, violentando con ello la norma electoral, en específico las disposiciones precisadas en el recuadro inserto en el subapartado previo.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de los ciudadanos mexicanos, de optar libremente por ser o no militante de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, efectivamente consintieron libremente en ser sus agremiados.

Por otra parte, como se analizó, para la afiliación indebida acreditada en el expediente que se resuelve se usaron los datos personales de los promoventes sin que éstos hubiesen otorgado su consentimiento para ello, lo cual, constituye un elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida.

En efecto, si bien es cierto, a partir de las constancias que obran en autos no está demostrado que los datos personales hubieran sido utilizados con un propósito diverso a la afiliación indebida en sí misma, o bien su difusión frente a terceros, lo es también que dicha información fue necesaria para materializar la incorporación de los datos de los actores al padrón de militantes del partido político denunciado.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo argumentado en la sentencia de siete de junio de dos mil dieciocho dictada por la Sala Superior al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-141/2018,⁴⁴⁴ en la que se estableció, en lo que interesa sobre el tema, lo siguiente:

“...los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de un ciudadano pertenecer a un partido político, no puede alegar que existe uso indebido de sus datos personales porque se consideran públicos.

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban pertenecer.”

De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción correspondiente al *PT*.

C. Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que el *PT* transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la normativa interna del instituto político, y que, tal infracción se cometió en detrimento de los derechos de más de un ciudadano, esta situación no conlleva estar en presencia de

⁴⁴⁴ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0141-2018.pdf

una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de afiliación a los institutos políticos, quienes incluyeron en su padrón de militantes a los hoy quejosos, sin demostrar el consentimiento previo para ello.

Caber precisar, que en apartados subsecuentes se analizará a detalle el impacto que tuvo dicha infracción, en atención al número de personas afiliadas indebidamente.

D. Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

- a) Modo.** En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles al *PT*, consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la *Constitución*; así como 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e) del COFIPE disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la LGPP, al incluir en su padrón de afiliados a **sesenta y un (61)** ciudadanos, sin tener la documentación soporte que acredite fehacientemente la voluntad de éstos de pertenecer a las filas de ese instituto político.
- b) Tiempo.** En el caso concreto, como se razonó en el considerando que antecede, las afiliaciones indebidas acontecieron en diversos momentos, mismos que se resumen en la tabla siguiente:

No	Ciudadano	Estatus actual	Fecha de Afiliación
2	Elizabeth Jiménez Avellaneda	No afiliada Cancelación 21/11/2017	28/01/2014
4	Jovana Berenice Castañeda Báez	No afiliada Cancelación 16/10/2017	29/11/2011
5	Flor Alicia Duarte Aguilar	Afiliada	11/12/2013

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Estatus actual	Fecha de Afiliación
7	Karina Rosales Melquiades	No afiliada Cancelación 04/12/2017	25/06/2014
8	Juan Carlos Salcido Álvarez	Afiliado	27/07/2011
9	Amada Dávalos Candelario	No afiliada Cancelación 11/12/2017	02/04/2009
11	José Francisco Obregón Martínez	No afiliado Cancelación 13/12/2017	28/10/2014
15	María de Jesús Huerta González	No afiliada Cancelación 07-12-2017	21/01/2014
17	Karla Mariela Carlón Millanes	Afiliada	14/02/2014
18	Irais Jacqueline Gálvez Botello	No afiliada Cancelación 11-12-2017	24/03/2017
19	Miriam Ortiz Chamorro	Afiliada	07/11/2013
20	Alma Gabriela Ríos Sánchez	Afiliada	07/04/2014
21	Mario Armando Pamas Reyna	Afiliado	09/12/2013
22	Anallely Hernández Hernández	Afiliada	24/02/2014
23	José Refugio Tagle Payán	Afiliado	21/09/2014
24	Juan Arroyo Mendoza	Afiliado	21/09/2008
27	Brandon Hernández Vázquez	No afiliado Cancelación 19/12/2017	13/03/2014
29	Araceli Jiménez Díaz	No afiliada Cancelación 19/12/2017	11/11/2013
30	Florentino Yectli Solís	Afiliado	05/02/2014
32	Elvira Fernández Cornejo	No afiliada Cancelación 11/12/2017	05/03/2014
34	Erika Jiménez Rueda	No afiliada Cancelación 19/12/2017	20/08/2014
35	Rosa Argentina Guadarrama Rosales	Afiliada	18/12/2013
36	Jesús Alberto Meráz Navarrete	Afiliado	18/12/2013
38	María Guadalupe Vargas Durán	No afiliada Cancelación 13/12/2017	10/03/2008
41	Víctor Ignacio González Legarda	No Afiliado Cancelación 19/12/2017	28/11/2014
42	Ariana Itzel Linares Sánchez	Afiliada	23/04/2014
44	Silvia Aguilar Córdova	Afiliada	25/11/2013
47	Elena Orta Flores	No afiliada Cancelación 15/12/2017	16/08/2014
48	María Yanelly Palmas Íñiguez	No afiliada Cancelación 19/12/2017	24/11/2014
49	Leonel Efrén Luque González	Afiliado	26/06/2008
50	Rosario Gómez Ruiz	Afiliada	05/11/2014
51	Ma. Guadalupe García Llamas	No afiliada Cancelación 21/12/2017	03/02/2017
54	Rigoberto Segura Solís.	Afiliado	30/03/2001

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Estatus actual	Fecha de Afiliación
55	Rogelio Díaz Saavedra	Afiliado	02/08/2010
56	Elvia de la Cruz Acosta	No afiliada Cancelación 08/01/2018	20/11/2013
57	María del Rosario Román Antúnez.	Afiliada	03/05/2010
58	Jaqueline Alfaro Jiménez	No afiliada Cancelación 21/12/2017	09/12/2014
59	Ma. Anita Gutiérrez Rodríguez	Afiliada	14/08/2014
60	Samuel Evaristo Tapia Rubio	No afiliado Cancelación 11/12/2017	15/01/2014
62	Graciela Marina Rivera Zamudio	No afiliada Cancelación 13/12/2017	25/10/2007
63	Dionisio Fernández Hernández	No afiliada Cancelación 20/12/2017	02/09/2014
64	Alicia Sánchez Flores	Afiliada	26/03/2014
65	María Natividad Ruiz Meza	Afiliada	11/12/2013
66	Martín Dueñas Ortiz	Afiliado	28/09/2010
67	Baldomero Cota Montaña	Afiliado	05/07/2008
68	Erika Susana González Franco	Afiliada	06/05/2014
69	Nora Graciela Reveles Castañeda	Afiliada	05/03/2015
70	María Elena Galván Álvarez	No afiliada Cancelación 19/12/2017	05/12/2013
71	Rosa Ícela Bustamante Coronel	Afiliada	16/12/2013
72	Mónica Damiana Leyva Buitimea	Afiliada	25/11/2013
73	Raquel Salazar Flores	Afiliada	17/11/2011
74	Juan Carlos Meza Viveros	Afiliado	13/07/2010
75	Jorge Alfredo López Manzanares	No afiliado Cancelación 08/01/2018	29/01/2009
76	Guadalupe Alejandra Fregoso	Afiliada	23/06/2008
78	Julio Iván Medina Martínez	No afiliado Cancelación 28/12/2017	16/01/2014
79	Mikhail Tolentino Jiménez	No afiliado Cancelación 08/01/2018	15/12/2013
81	Cristóbal Hernández Mercado	Afiliado	08/01/2015
83	Beatriz Hernández Bello	Afiliada	01/07/2008
86	Verónica Tenorio González	Afiliada	22/03/2013
90	Juan Carlos Santana Sánchez	Afiliado	25/01/2014
91	Cirenia Segundo Barrios	Afiliada	27/01/2014

c) **Lugar.** Con base en las razones plasmadas en los escritos de denuncias, se deduce que las faltas atribuidas al *PT* se cometieron de la siguiente manera:

No	Ciudadano	Entidad
21	Mario Armando Pamas Reyna	Baja California

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Entidad
49	Leonel Efrén Luque González	Baja California Sur
50	Rosario Gómez Ruiz	
66	Martín Dueñas Ortiz	
67	Baldomero Cota Montaña	

No	Ciudadano	Entidad
4	Jovana Berenice Castañeda Báez	Ciudad de México
7	Karina Rosales Melquiades	
18	Irais Jacqueline Gálvez Botello	
47	Elena Orta Flores	
58	Jaqueline Alfaro Jiménez	

No	Ciudadano	Entidad
9	Amada Dávalos Candelario	Colima
59	Ma. Anita Gutiérrez Rodríguez	
60	Samuel Evaristo Tapia Rubio	
70	María Elena Galván Álvarez	
76	Guadalupe Alejandra Fregoso	
78	Julio Iván Medina Martínez	

No	Ciudadano	Entidad
11	José Francisco Obregón Martínez	Chihuahua
35	Rosa Argentina Guadarrama Rosales	
36	Jesús Alberto Meráz Navarrete	
38	María Guadalupe Vargas Durán	
41	Víctor Ignacio González Legarda	

No	Ciudadano	Entidad
68	Erika Susana González Franco	Durango
69	Nora Graciela Reveles Castañeda	

No	Ciudadano	Entidad
90	Juan Carlos Santana Sánchez	Estado de México
91	Cirenia Segundo Barrios	

No	Ciudadano	Entidad
30	Florentino Yectli Solís	Guerrero
57	María del Rosario Román Antúnez.	
73	Raquel Salazar Flores	
74	Juan Carlos Meza Viveros	
86	Verónica Tenorio González	

No	Ciudadano	Entidad
22	Anallely Hernández Hernández	Hidalgo
55	Rogelio Díaz Saavedra	

No	Ciudadano	Entidad
51	Ma. Guadalupe García Llamas	Jalisco

No	Ciudadano	Entidad
2	Elizabeth Jiménez Avellaneda	Michoacán
5	Flor Alicia Duarte Aguilar	

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Entidad
24	Juan Arroyo Mendoza	
44	Silvia Aguilar Córdova	
54	Rigoberto Segura Solís.	
No	Ciudadano	Entidad
19	Miriam Ortiz Chamorro	Morelos
42	Ariana Itzel Linares Sánchez	
83	Beatriz Hernández Bello	
No	Ciudadano	Entidad
65	María Natividad Ruiz Meza	Nayarit
No	Ciudadano	Entidad
20	Alma Gabriela Ríos Sánchez	Nuevo León
64	Alicia Sánchez Flores	
No	Ciudadano	Entidad
15	María de Jesús Huerta González	Oaxaca
No	Ciudadano	Entidad
34	Erika Jiménez Rueda	Quintana Roo
No	Ciudadano	Entidad
8	Juan Carlos Salcido Álvarez	Sinaloa
23	José Refugio Tagle Payán	
No	Ciudadano	Entidad
17	Karla Mariela Carlón Millanes	Sonora
71	Rosa Ícela Bustamante Coronel	
72	Mónica Damiana Leyva Buitimea	
81	Cristóbal Hernández Mercado	
No	Ciudadano	Entidad
56	Elvia de la Cruz Acosta	Tabasco
75	Jorge Alfredo López Manzanares	
79	Mikhail Tolentino Jiménez	
No	Ciudadano	Entidad
32	Elvira Fernández Cornejo	Tlaxcala
No	Ciudadano	Entidad
62	Graciela Marina Rivera Zamudio	Veracruz
63	Dionisio Fernández Hernández	
No	Ciudadano	Entidad
27	Brandon Hernández Vázquez	Zacatecas
29	Araceli Jiménez Díaz	
48	María Yanelly Palmas Iñiguez	

E. Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Se considera que en el caso existe una conducta **dolosa** por parte del *PT*, en violación a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e) del COFIPE, disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la LGPP.

La falta se califica como **dolosa**, por lo siguiente:

- El *PT* es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus constitucional de **entidad de interés público**, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la *Constitución*; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- El *PT* está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 38, párrafo 1, inciso a), del *COFIPE*, disposición que se replica en el diverso 25, párrafo 1, inciso a) de la *LGPP*.
- El de libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que

constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía.**

- Todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.
- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e), del COFIPE.
- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria.**
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad

nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.

- La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, es una violación de orden constitucional y legal que **requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento.**

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta se considera dolosa, porque:

- 1) Los quejosos aducen que no solicitaron en momento alguno su registro o incorporación como militantes al *PT*.
- 2) Quedó acreditado que los quejosos aparecieron en el padrón de militantes del *PT*.
- 3) El partido político denunciado no demostró que la afiliación de los quejosos se hubiera realizado a través de los mecanismos legales y partidarios conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y voluntaria de los denunciantes.
- 4) El partido denunciado no demostró ni probó que la afiliación de los quejosos fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun indiciaria, para estimar que la afiliación de los quejosos fue debida y apegada a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.

F. Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el *PT*, se cometió al afiliar indebidamente a **sesenta y un (61)** ciudadanos, sin demostrar al acto volitivo de éstos tanto de ingresar o permanecer inscritos en su padrón de militantes como de haber proporcionado sus datos personales para ese fin.

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en garantizar el derecho de libre afiliación y la protección de los datos personales de los ciudadanos mexicanos, mediante la conservación de los documentos atinentes que permitan demostrar el acto de voluntad de los ciudadanos quejosos de militar en los distintos partidos políticos ni para el uso de sus datos personales.

2. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A. Reincidencia

Por cuanto a la **reincidencia** en que pudo haber incurrido el *PT*, este organismo electoral autónomo considera que **no se actualiza**.

De conformidad con el artículo 355 párrafo 6 del *COFIPE*, cuyo contenido reproduce el diverso 458, párrafo 6 de la *LGIPE*, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el mencionado *Código*, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, la *Sala Superior* ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);
2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,

3. Que en ejercicios anteriores el infractor **haya sido sancionado por esa infracción mediante Resolución o sentencia firme.**

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el *Tribunal Electoral*, a través de la Tesis de Jurisprudencia **41/2010**, de rubro **REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.**⁴⁴⁵

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con anterioridad.

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta.

En este sentido, debe precisarse que, en el presente asunto, no puede considerarse actualizado dicho supuesto por cuanto hace al *PT*, pues en los archivos del *INE*, no obra alguna resolución en la que se haya sancionado a ese instituto político por faltas como la que se sanciona por esta vía, que se hayan dictado con anterioridad a los hechos materia de las presentes denuncias.

B. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

⁴⁴⁵ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010>

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, pues se comprobó que el *PT* afilió a diversos ciudadanos, sin demostrar contar con la documentación soporte correspondiente, que medió la voluntad de sus agremiados de pertenecer o estar inscritos a dicho instituto político.
- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, de optar por ser o no militante de algún partido político, y la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.
- Para materializar la afiliación indebida de los denunciantes, se utilizaron indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para formar el padrón de afiliados del *PT*.
- No existió un beneficio por parte del partido denunciado, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral.

- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso Electoral.
- No existe reincidencia por parte del *PT*.

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente **calificar la falta** en que incurrió el *PT* como de **gravedad ordinaria**, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el partido denunciado dolosamente infringió el derecho de libre afiliación de los hoy quejosos, lo que constituye una violación al derecho fundamental de los ciudadanos reconocidos en la *Constitución*.

Al respecto, es importante precisar que para efectos de determinar el monto de la sanción a imponer se debe diferenciar, **como en el caso acontece, si se está ante una afiliación indebida** o una violación al derecho de libre afiliación en su vertiente de no permitirle al quejoso ser desafiliado.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo resuelto por la Sala Superior al dictar sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-141/2018, en la que determinó, esencialmente, lo siguiente:

“Finalmente, para efectos de la sanción a imponer, consideró oportuno diferenciar entre aquellos ciudadanos de los que se utilizaron indebidamente sus datos personales para afiliarlos sin su consentimiento al partido denunciado (once ciudadanos) y aquélla que denunció la presunta indebida afiliación en su vertiente de falta de atención al derecho de desafiliación, puesto que, si bien en ambos casos estamos ante la presencia de una falta grave ordinaria, lo cierto es que en el primero de los supuestos hubieron hechos afirmativos tendentes a menoscabar el derecho de libre afiliación, utilizando datos personales de los afectados y en el segundo, se trata de una omisión, lo cual conlleva que la sanción imponer en cada supuesto sea diferenciada.

Por tal motivo, en el caso concreto, se estima que la motivación expuesta por el Instituto Nacional Electoral fue suficiente para justificar la individualización de la sanción.”

C. Sanción a imponer

Ahora bien, la mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción.

Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor entidad.⁴⁴⁶

El artículo 354, párrafo 1, inciso a) del COFIPE, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE, dispone el catálogo de sanciones a imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México; reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita; y en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la *Constitución* y de la *LGIPE*, con la cancelación de su registro como partido político.

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción (especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción acreditada), así como la conducta realizada por el *PT* se determina que debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida.

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la *LGIPE*, confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que, a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realicen una falta similar.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible

⁴⁴⁶ Véase la tesis XXVIII/2003 de la Sala Superior, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.

comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que ni el COFIPE ni la LGIPE, determinan pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo establecen las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

Asimismo, es importante tomar en cuenta el número de ciudadanos afiliados indebidamente al *PT*, es decir, los **sesenta y un (61) ciudadanos**.

Con base en lo anterior, este Consejo General estima que, derivado de las circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida al *PT*, justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 354, párrafo 1, inciso a), del COFIPE, consistente en una **MULTA unitaria por cuanto hace a cada uno de los sesenta y un (61) ciudadanos sobre quienes se cometió la falta acreditada**, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto.

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la sanción a imponer.

En este orden de ideas, es pertinente hacer notar, que ha sido criterio de esta autoridad, en la resolución INE/CG120/2018, de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/ALC/CG/39/2017, así como en la resolución INE/CG448/2018, de once de mayo de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2017, las cuales fueron confirmadas por el *Tribunal Electoral* al dictar sentencia el veinticinco de abril y once de mayo de dos mil dieciocho, en los medios de impugnación con clave

SUP-RAP-047/2018⁴⁴⁷ y SUP-RAP-137/2018,⁴⁴⁸ respectivamente, en los que se sancionó por una afiliación indebida de un ciudadano, en cada caso, con una multa equivalente a 642 (seiscientos cuarenta y dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento de la comisión de la conducta, sanción que se estima debe tomarse como base para el presente asunto, si se considera que en dichos asuntos se demostró la comisión de una infracción similar a la que acontece en los casos que aquí se resuelven.

En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta causa, en específico **que no se refiere a la interposición de una sola queja** —a diferencia de lo que aconteció en los precedentes citados—, **sino de una multiplicidad de quejas y afiliaciones indebidas, las cuales han quedado acreditadas en autos**, es claro que la individualización de la sanción aplicada con motivo de la afiliación indebida de los ciudadanos al partido político denunciado, debe resultar proporcional al número de ciudadanos en cuyo perjuicio se cometió la falta, sin perder de vista las condiciones socioeconómicas del instituto político, y no simplemente, los hechos denunciados y acreditados en el presente procedimiento, a fin de que la sanción que se imponga resulte efectivamente proporcional sin ser excesiva.

⁴⁴⁷ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0047-2018.pdf

⁴⁴⁸ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0137-2018.pdf

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad debe determinar su monto o cuantía, **tomando en cuenta** las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que corresponda.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión que tiene sustento en la Tesis relevante **XXVIII/2003**,⁴⁴⁹ emitida por el *Tribunal Electoral*, misma que a letra establece:

“SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.- En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios

⁴⁴⁹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.”

Ahora bien, a juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con base en lo dispuesto en la fracción II del numeral citado, lo procedente es imponer sendas **multas** equivalentes a **seiscientos cuarenta y dos** días de salario mínimo general para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) al **PT**, **por cada uno de los sesenta y un (61) ciudadanos que fueron afiliados indebidamente** y que aparecen en su padrón de afiliados.

Al respecto, es un hecho notorio que se invoca en términos de lo establecido en el artículo 358 del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 461 de la *LGIFE*, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fija anualmente los montos respectivos, mismos que al ser relacionados con las fechas de afiliación, para obtener la sanción que corresponde por cuanto a cada uno de los ciudadanos indebidamente afiliados, arrojan lo siguiente:

PT		
Total de quejosos	Salario mínimo	Sanción a imponer
Afiliación en 2001		
1	\$40.35	\$25,904.70
Afiliación en 2007		
1	\$50.57	\$32,465.94
Afiliación en 2008		
6	\$52.59	\$202,576.68
Afiliación en 2009		
2	\$54.80	\$70,363.20
Afiliación en 2010		
4	\$57.46	\$147,557.28
Afiliación en 2011		
3	\$59.82	\$115,213.32
Afiliación en 2013		
14	\$64.76	\$582,062.88
Afiliación en 2014		
26	\$67.29	\$1'123,204.68
Afiliación en 2015		
2	\$70.10	\$90,008.40
Afiliación en 2017		

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

<i>PT</i>		
Total de quejosos	Salario mínimo	Sanción a imponer
2	Unidad de Medida y Actualización \$75.49	\$96,929.16
TOTAL		\$2'486,286.24 [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].

Sanción por ciudadano:

No	Ciudadano	Fecha de Afiliación	Salario mínimo	Sanción a imponer
2	Elizabeth Jiménez Avellaneda	28/01/2014	\$67.29	\$43,199.98
4	Jovana Berenice Castañeda Báez	29/11/2011	\$59.82	\$38,404.28
5	Flor Alicia Duarte Aguilar	11/12/2013	\$64.76	\$41,575.89
7	Karina Rosales Melquiades	25/06/2014	\$67.29	\$43,199.98
8	Juan Carlos Salcido Álvarez	27/07/2011	\$59.82	\$38,404.28
9	Amada Dávalos Candelario	02/04/2009	\$54.80	\$35,181.09
11	José Francisco Obregón Martínez	28/10/2014	\$67.29	\$43,199.98
15	María de Jesús Huerta González	21/01/2014	\$67.29	\$43,199.98
17	Karla Mariela Carlón Millanes	14/02/2014	\$67.29	\$43,199.98
18	Irais Jacqueline Gálvez Botello	24/03/2017	\$75.49 UMA	\$48,464.58
19	Miriam Ortiz Chamorro	07/11/2013	\$64.76	\$41,575.89
20	Alma Gabriela Ríos Sánchez	07/04/2014	\$67.29	\$43,199.98
21	Mario Armando Pamas Reyna	09/12/2013	\$64.76	\$41,575.89
22	Anallely Hernández Hernández	24/02/2014	\$67.29	\$43,199.98
23	José Refugio Tagle Payán	21/09/2014	\$67.29	\$43,199.98
24	Juan Arroyo Mendoza	21/09/2008	\$52.59	\$33,762.53
27	Brandon Hernández Vázquez	13/03/2014	\$67.29	\$43,199.98
29	Araceli Jiménez Díaz	11/11/2013	\$64.76	\$41,575.89
30	Florentino Yectli Solís	05/02/2014	\$67.29	\$43,199.98
32	Elvira Fernández Cornejo	05/03/2014	\$67.29	\$43,199.98
34	Erika Jiménez Rueda	20/08/2014	\$67.29	\$43,199.98
35	Rosa Argentina Guadarrama Rosales	18/12/2013	\$64.76	\$41,575.89
36	Jesús Alberto Meráz Navarrete	18/12/2013	\$64.76	\$41,575.89
38	María Guadalupe Vargas Durán	10/03/2008	\$52.59	\$33,762.53
41	Víctor Ignacio González Legarda	28/11/2014	\$67.29	\$43,199.98
42	Ariana Itzel Linares Sánchez	23/04/2014	\$67.29	\$43,199.98
44	Silvia Aguilar Córdova	25/11/2013	\$64.76	\$41,575.89
47	Elena Orta Flores	16/08/2014	\$67.29	\$43,199.98
48	María Yanelly Palmas Iñiguez	24/11/2014	\$67.29	\$43,199.98
49	Leonel Efrén Luque González	26/06/2008	\$52.59	\$33,762.53
50	Rosario Gómez Ruiz	05/11/2014	\$67.29	\$43,199.98

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Fecha de Afiliación	Salario mínimo	Sanción a imponer
51	Ma. Guadalupe García Llamas	03/02/2017	\$75.49 UMA	\$48,464.58
54	Rigoberto Segura Solís.	30/03/2001	\$40.35	\$25,904.03
55	Rogelio Díaz Saavedra	02/08/2010	\$57.46	\$36,889.00
56	Elvia de la Cruz Acosta	20/11/2013	\$64.76	\$41,575.89
57	María del Rosario Román Antúnez.	03/05/2010	\$57.46	\$36,889.00
58	Jaqueline Alfaro Jiménez	09/12/2014	\$67.29	\$43,199.98
59	Ma. Anita Gutiérrez Rodríguez	14/08/2014	\$67.29	\$43,199.98
60	Samuel Evaristo Tapia Rubio	15/01/2014	\$67.29	\$43,199.98
62	Graciela Marina Rivera Zamudio	25/10/2007	\$50.57	\$32,465.68
63	Dionisio Fernández Hernández	02/09/2014	\$67.29	\$43,199.98
64	Alicia Sánchez Flores	26/03/2014	\$67.29	\$43,199.98
65	María Natividad Ruiz Meza	11/12/2013	\$64.76	\$41,575.89
66	Martín Dueñas Ortiz	28/09/2010	\$57.46	\$36,889.00
67	Baldomero Cota Montaña	05/07/2008	\$52.59	\$33,762.53
68	Erika Susana González Franco	06/05/2014	\$67.29	\$43,199.98
69	Nora Graciela Reveles Castañeda	05/03/2015	\$70.10	\$45,003.81
70	María Elena Galván Álvarez	05/12/2013	\$64.76	\$41,575.89
71	Rosa Ícela Bustamante Coronel	16/12/2013	\$64.76	\$41,575.89
72	Mónica Damiana Leyva Buitimea	25/11/2013	\$64.76	\$41,575.89
73	Raquel Salazar Flores	17/11/2011	\$59.82	\$38,404.28
74	Juan Carlos Meza Viveros	13/07/2010	\$57.46	\$36,889.00
75	Jorge Alfredo López Manzanares	29/01/2009	\$54.80	\$35,181.09
76	Guadalupe Alejandra Fregoso	23/06/2008	\$52.59	\$33,762.53
78	Julio Iván Medina Martínez	16/01/2014	\$67.29	\$43,199.98
79	Mikhail Tolentino Jiménez	15/12/2013	\$64.76	\$41,575.89
81	Cristóbal Hernández Mercado	08/01/2015	\$70.10	\$45,003.81
83	Beatriz Hernández Bello	01/07/2008	\$52.59	\$33,762.53
86	Verónica Tenorio González	22/03/2013	\$64.76	\$41,575.89
90	Juan Carlos Santana Sánchez	25/01/2014	\$67.29	\$43,199.98
91	Cirenia Segundo Barrios	27/01/2014	\$67.29	\$43,199.98
TOTAL				\$2'486,274.63 [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, pues sin ser gravosa, sí puede inhibir al *PT*, para que en el futuro vigile el cumplimiento de las normas de la materia.

Ahora bien, es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la *Constitución* —efectuado por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones.

En esas condiciones, lo procedente es transformar la sanción que se considera idónea, expresada en salarios mínimos, a Unidades de Medida y Actualización, para lo cual es necesario dividir el monto inicial (seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México multiplicado por el salario mínimo vigente en cada año señalado en el cuadro), entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, misma que equivale, para el ejercicio fiscal en curso, a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M. N.).

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 10/2018,⁴⁵⁰ del *Tribunal Electoral*, de rubro y contenido siguiente:

“MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.- De la interpretación sistemática de los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transitorios segundo y tercero del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como 44, párrafo primero, inciso aa), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando en consideración el principio de legalidad que rige en los procedimientos sancionadores, se advierte que el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del ilícito.”

De esta manera, al aplicar la fórmula mencionada, se obtiene lo siguiente:

Salario mínimo vigente	El SMGV se multiplica por 642 días de SMGV en el año	La cifra obtenida de la multiplicación anterior, se divide entre la Unidad de Medida y Actualización vigente de \$80.60	La cifra obtenida de la operación anterior se multiplica por el número de ciudadanos	Sanción a imponer en Unidad de Medida y Actualización
Afiliación en 2001				
\$40.35	642	321.39	1	321.39
Afiliación en 2007				

⁴⁵⁰ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=Jurisprudencia,10/2018>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

Salario mínimo vigente	El SMGV se multiplica por 642 días de SMGV en el año	La cifra obtenida de la multiplicación anterior, se divide entre la Unidad de Medida y Actualización vigente de \$80.60	La cifra obtenida de la operación anterior se multiplica por el número de ciudadanos	Sanción a imponer en Unidad de Medida y Actualización
\$50.57	642	402.80	1	402.80
Afiliación en 2008				
\$52.59	642	418.89	6	2,513.34
Afiliación en 2009				
\$54.80	642	436.49	2	872.98
Afiliación en 2010				
\$57.46	642	457.68	4	1,830.72
Afiliación en 2011				
\$59.82	642	476.48	3	1,429.44
Afiliación en 2013				
\$64.76	642	515.83	14	7,221.62
Afiliación en 2014				
\$67.29	642	535.98	26	13,935.48
Afiliación en 2015				
\$70.10	642	558.36	2	1,116.72

La suma de los montos antes referidos, corresponde a 29,644.49 (veintinueve mil seiscientos cuarenta y cuatro punto cuarenta y nueve) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal equivalente a \$2'389,345.89 (dos millones trescientos ochenta y nueve mil trescientos cuarenta y cinco pesos 89/100 M.N.) [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].

A la cifra anterior, debemos sumar el monto correspondiente a dos ciudadanos que fueron afiliados en 2017, sobre los cuales se debe imponer la multa al *PT*, de manera directa con la Unidad de Medida y Actualización vigente en ese año, siendo esta de \$75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.), lo que atendiendo el número de casos corresponde a 1,284, unidades, equivalente a **\$96,929.16 (noventa y seis mil novecientos veintinueve pesos 16/100 M.N.) [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].**

Así, de la suma de las cantidades de **\$2'389,345.89** (dos millones trescientos ochenta y nueve mil trescientos cuarenta y cinco pesos 89/100 M.N.) y **\$96,929.16** (noventa y seis mil novecientos veintinueve pesos 16/100 M.N.), se obtiene la cifra final siguiente:

- **\$2'486,275.05** (dos millones cuatrocientos ochenta y seis mil doscientos setenta y cinco pesos 05/100 M.N.).

Debe precisarse que se considera que la multa impuesta al *PT* constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, ya que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, se concluye que la misma resulta eficaz y proporcional.

D. El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la infracción

Se estima que la infracción cometida por parte del *PT*, aun cuando causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de la infracción.

E. Las condiciones socioeconómicas del infractor

Sobre este punto, es preciso señalar que conforme al Acuerdo INE/CG339/2017, emitido por este *Consejo General* el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se estableció que, entre otros, el *PT* recibiría mensualmente en el presente ejercicio, por concepto de financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes, la siguiente cantidad:

SUJETO	Monto del financiamiento público para el sostenimiento de Actividades Ordinarias del mes de septiembre 2018
PT	\$19'737,029.00

Ahora bien, según fue informado por la DEPPP, a través del oficio **INE/DEPPP/DE/DPPF/5693/2018**, el monto de la ministración mensual correspondiente a septiembre de dos mil dieciocho, debía ser ajustado en función de las sanciones administrativas pendientes de cubrir por dicho instituto político nacional, por lo cual la cifra total a recibir sería la siguiente:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

SUJETO	IMPORTE DE LA MINISTRACIÓN DE SEPTIEMBRE DE 2018	IMPORTE TOTAL DE LAS SANCIONES SEPTIEMBRE 2018	IMPORTE DE REINTEGRO DE FINANCIAMIENTO LOCAL PARA GASTOS DE CAMPAÑA	IMPORTE NETO DE LA MINISTRACIÓN
PT	\$19,737.029.00	\$9,868,514.00	\$0.00	\$9,868,515.00

F. Impacto en las actividades del sujeto infractor

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta al *PT*, no es de carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida, respecto al monto del financiamiento que recibirá por concepto de actividades ordinarias permanentes en el mes de agosto del año en curso, los siguientes porcentajes:

Partido político	Año	Monto de la sanción por ciudadano. ⁴⁵¹	Ciudadanos indebidamente afiliados	% de la ministración mensual por ciudadano
PT	2001	\$25,904.03	1	0.26%
	2007	\$32,465.68	1	0.32%
	2008	\$33,762.53	6	0.34%
	2009	\$35,181.09	2	0.35%
	2010	\$36,889.00	4	0.37%
	2011	\$38,404.28	3	0.38%
	2013	\$41,575.89	14	0.42%
	2014	\$43,199.98	26	0.43%
	2015	\$45,003.81	2	0.45%
	2017	\$48,464.58	2	0.48%

Por consiguiente, la sanción impuesta al *PT* no es de carácter gravoso, si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual correspondiente al mes de septiembre de este año.

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción cometida por el *PT* (especialmente los bienes jurídicos

⁴⁵¹ Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.

protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con el financiamiento que recibe del *INE* para el mes de septiembre de dos mil dieciocho, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político sancionado.

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el partido político de mérito —tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagar sin que ello afecte sus operaciones ordinarias, además de que las sanciones son proporcionales a las faltas cometidas y se estima que, sin resultar excesivas ni ruinosas, pueden generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la *Sala Superior* en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-250/2009,⁴⁵² es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

QUINTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE LOS QUEJOSOS COMO MILITANTES. En tal sentido, se tiene que la voluntad de los denunciantes es no pertenecer al *PT*, por lo que se debe vincular al partido político, para que, de ser el caso, en el supuesto que los quejosos continúen en su padrón de militantes, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentó su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, los medios de prueba que amparen el cumplimiento.

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017,⁴⁵³ de cinco de enero de dos mil diecisiete, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un

⁴⁵² Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://portal.te.gob.mx/coleccion/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm>

⁴⁵³ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/JDC/2/SUP_2017_JDC_2-626321.pdf

ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el *INE*, que lo vincule con un instituto político en particular.

SEXTO. PRONUNCIAMIENTO SOBRE MANIFESTACIONES DE PRESUNTA ENTREGA DE DADIVAS Y/O COACCIÓN ATRIBUIBLE AL PT. No pasa inadvertido para esta autoridad electoral nacional el hecho de que los ciudadanos **Verónica Zaleta Chávez, Perla Azenet García Garza, Juan Antonio Meléndez Hernández y María Guadalupe Oliva Fernández**, al dar contestación a la vista para formular alegatos, hicieron del conocimiento, de forma individual, que el registro al padrón de militantes del instituto político denunciado, tuvo como origen la presunta promesa de entrega de dadivas o apoyos por parte del *PT*.

Lo anterior, al manifestar, esencialmente, cada uno de ellos, lo siguiente:

1. Verónica Zaleta Chávez

Alegatos:⁴⁵⁴ *...si bien es cierto que se firmó una hoja, esta fue en blanco y fue para la adquisición de una despesa.*

2. Perla Azenet García Garza

Alegatos:⁴⁵⁵ *...el escrito que presentó el Partido del Trabajo donde supuestamente solo se afilió a dicho partido fue llenada a partir de la credencial de elector que me fue solicitada a cambio de seguir laborando en un mercado sobre ruedas, jamás se me informó que estaría siendo afiliada a dicho partido, a lo cual a base de engaños tenía que firmar un pequeño recuadro en una hoja para una supuesta credencial que se acreditaría a la suscrita como vendedora en dicho mercado (la cual jamás se me hizo llegar), y además la fotografía que se me tomo también referente a la misma credencial para acreditar a la suscrita como vendedora; en la opción grado de estudios se manifiesta que solo es primaria, lo cual es completamente falso,*

⁴⁵⁴ Visible a página 2229 del expediente.

⁴⁵⁵ Visible a página 1944 del expediente.

anexó copia de la cedula para acreditar el grado de estudios verdadero de la suscrita.

3. Juan Antonio Meléndez Hernández

Alegatos:⁴⁵⁶ ...el coordinador del Partido en cuestión creo un Comité Ciudadano, ofreciendo apoyos a colonos de ciertos sectores, argumentando que quienes fueran beneficiados no estarían ligados ni comprometidos de ninguna forma con el Partido del Trabajo, por lo cual no existiría afiliación alguna a dicho partido político.

4. María Guadalupe Oliva Fernández

Alegatos:⁴⁵⁷ ...me pidieron copia de mi credencial para votar y nos pidieron que firmáramos un documento, según era para la dispensa que nos darían, la cual hasta la fecha nunca nos dieron y por lo que puedo ver ahora, resultó que me afiliaron a dicho partido sin mi consentimiento.

Esto es, los quejosos en cita, además, de realizar manifestaciones sobre la afiliación al *PT*, argumentaron, de forma individual, que el registro al padrón de militantes del instituto político denunciado, tuvo como origen la presunta promesa de entrega de dadivas o apoyos, conducta y supuesta infracción distinta a la que, de manera primigenia, se instauro el presente procedimiento sancionador ordinario.

Al respecto, se debe señalar que, si bien los quejosos realizaron diversas manifestaciones sobre una supuesta entrega de apoyos, dadivas o, en su caso, coacción por parte del *PT*, lo cierto es que ninguno de ellos precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que, según su dicho, se llevaron a cabo los hechos que hacen del conocimiento de esta autoridad electoral, ni tampoco presentaron algún medio de prueba para corroborar su dicho.

Esto es, en el caso de **Verónica Zaleta Chávez**, la ciudadana manifiesta que firmó una hoja con el objeto de adquirir una dispensa, sin precisar la forma en que se le hizo del conocimiento y se desarrolló tal conducta, ni tampoco indicó el nombre de

⁴⁵⁶ Visible a páginas 2053-2054 del expediente.

⁴⁵⁷ Visible a página 2230 del expediente.

la persona que ejecutó tal acción, ni el lugar en el que firmó, ni la temporalidad en que esta se llevó a cabo.

Es decir, no precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar para el inicio de una investigación en materia electoral.

Por lo que hace a **Perla Azenet García Garza**, la denunciante aduce que el registro al *PT*, aconteció derivado de la entrega de su credencial para votar a cambio de seguir laborando en un mercado sobre ruedas, sin embargo, de la lectura de su escrito de contestación a la vista de alegatos, no se advierten las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que supuestamente se llevó a cabo el hecho que hace del conocimiento de esta autoridad electoral, ni tampoco presentó algún medio de prueba para corroborar su dicho.

Es decir, no indica, en su caso, el nombre del o los sujetos a los que, según su dicho, hizo entrega de su credencial para votar, el lugar en donde aconteció tal evento, ni tampoco la temporalidad en la que se llevó a cabo la firma de una la hoja que alude.

Además, tampoco ofrece elemento de prueba para corroborar su dicho, en el caso, la supuesta credencial que la acredita o acreditaba, en ese momento, como vendedora del mercado y por la cual, según su dicho, se vio engañada a firmar *un pequeño recuadro en una hoja*.

Respecto a **Juan Antonio Meléndez Hernández**, el quejoso adujo que *...el coordinador del Partido en cuestión creo un Comité Ciudadano, ofreciendo apoyos*, sin embargo, no especifica el nombre del supuesto coordinador del *PT*, el lugar de operaciones del mismo, ni tampoco de qué tipo o en qué consistía el apoyo al que hace referencia y, sí, en su caso, recibió el mismo.

Es decir, no precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que, según su dicho, se llevó a cabo el registro de su afiliación, la persona que ejecutó tal acción, ni tampoco presentó algún medio de prueba para corroborar su dicho.

Finalmente, respecto a la ciudadana **María Guadalupe Oliva Fernández**, ésta manifestó que le pidieron copia de su credencial para votar y que firmara un documento, según su dicho, para la entrega de una despensa, sin embargo, no precisa el nombre del sujeto o de los sujetos que le solicitaron tanto la entrega de su documentación, como el hecho de que plasmara su firma.

De igual forma, la ciudadana en cita es omisa en referir el lugar en el que, según su dicho, se cometió tal acción, ni la temporalidad en que esta se ejecutó, ni mucho menos, como en los casos anteriormente referidos, aportó medio de prueba para corroborar su dicho.

En suma, de las manifestaciones de los cuatro ciudadanos antes referidos, no hay elementos mínimos indiciarios sobre los cuales esta autoridad pueda seguir una línea de investigación, pues es obligación del quejoso proporcionar los medios probatorios que permitan la implementación de la misma, ya que corresponde a este la carga de la prueba para acreditar su dicho.

Al respecto, debe tenerse presente que en el procedimiento administrativo sancionador las denuncias, deben estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, de lo contrario se imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a quien se le atribuyen los hechos, como se señala en la Tesis de Jurisprudencia **16/2011**,⁴⁵⁸ del máximo tribunal de la materia, de rubro ***PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.***

Esto es, para el inicio o no de una investigación, se debe ponderar objetiva y razonablemente que los hechos que dan origen a la denuncia y los medios de prueba aportados son de la entidad necesaria para estar en posibilidad de, cuando menos indiciariamente dar curso o servir de base a la investigación de una conducta

⁴⁵⁸ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=16/2011&tpoBusqueda=S&sWord=16/2011>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

que se dice, transgrede a la ley electoral o, en el caso, lograr la identificación del o los sujetos responsables.

En efecto, el ejercicio de la atribución de investigación por parte de la autoridad electoral nacional no puede soslayar que corresponde al denunciante aportar datos precisos y elementos de convicción idóneos para acreditar, al menos de manera indiciaria, los hechos denunciados, **así como para estar en posibilidad de identificar a los eventuales responsables de la comisión de los hechos que se dicen infractores de la norma, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que supuestamente se cometieron, cuestión que, como se evidenció con antelación, en el particular no aconteció.**

Además, es importante destacar que, en el caso, los ciudadanos quejosos no denuncian de manera directa los hechos anteriormente descritos, sino que estos, como se indicó, derivan de manera indirecta de la investigación y pronunciamiento sobre conducta distinta (afiliación indebida).

Es decir, en el particular, los ciudadanos quejosos no denuncian de manera directa la entrega de dadivas o apoyos o, en su caso, una supuesta coacción atribuible al *PT*, sino que su alegato deriva para acreditar, a su juicio, la afiliación debida o indebida al partido político denunciado.

Finalmente, es importante destacar que, del análisis preliminar a las constancias de autos, respecto a estos cuatro ciudadanos y la conducta materia de pronunciamiento en el presente apartado, se advierte lo siguiente:

Ciudadano	Entidad de afiliación	Municipio	Fecha de afiliación	Tipo de apoyo o coacción
Verónica Zaleta Chávez	Tamaulipas	Reynosa	23/08/2014	Despensa
Perla Azenet García Garza	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	29/11/2013	Seguir laborando en Mercado
Juan Antonio Meléndez Hernández	Tamaulipas	Altamira	07/11/2011	Apoyo (sin especificar)
María Guadalupe Oliva Fernández	Tamaulipas	Reynosa	05/11/2014	Despensa

Como se aprecia, los supuestos eventos que hacen del conocimiento los cuatro ciudadanos en cita, acontecieron en entidades federativas, municipios y temporalidades distintas, lo cual no evidencia, en modo alguno, una sistematicidad en la probable comisión de tales conductas.

Esto es, se considera que de las constancias que obran en autos no es obtener elementos mínimos que permitan inferir siquiera de manera indiciaria la comisión de la conducta que se pretende atribuir al *PT*.

Con base en lo expuesto, ante la falta de precisión de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que supuestamente se cometieron los hechos materia de pronunciamiento, así como de elementos probatorios que den sustento a tales afirmaciones, se considera que no existe razón que justifique el inicio de una investigación por parte de esta autoridad electoral nacional.

No se omite referir que, en el supuesto de que los ciudadanos quisieran promover una queja o denuncia por tales hechos, se dejan a salvo sus derechos para ejercer tal acción, en cuyo caso deberán precisar las circunstancias antes descritas y aportar los medios de prueba que consideren necesarios.

SÉPTIMO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la *Constitución*,⁴⁵⁹ se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previsto en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

⁴⁵⁹ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª), Página: 2864, Rubro: “**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.**”

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara **infundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra del *PT*, al no infringir las disposiciones electorales de libre afiliación respecto de **veintisiete (27) ciudadanos**, en términos de lo establecido en el **Apartado B** del Considerando TERCERO de esta Resolución.

SEGUNDO. Se declara **fundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra del *PT*, al infringir las disposiciones electorales de libre afiliación de **sesenta y un (61) ciudadanos**, en términos de lo establecido en el **Apartado A** del Considerando TERCERO de esta Resolución.

TERCERO. En términos del Considerando CUARTO de la presente Resolución, se impone al *PT*, **una multa por la afiliación indebida de cada uno de los sesenta y un (61) ciudadanos**, conforme a los montos que se indican a continuación:

No	Ciudadano	Sanción a imponer
2	Elizabeth Jiménez Avellaneda	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014]
4	Jovana Berenice Castañeda Báez	476.48 (cuatrocientos setenta y seis punto cuarenta y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$38,404.28 (treinta y ocho mil cuatrocientos cuatro pesos 28/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2011]
5	Flor Alicia Duarte Aguilar	515.83 (quinientos quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$41,575.89 (cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 89/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2013]
7	Karina Rosales Melquiades	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014]
8	Juan Carlos Salcido Álvarez	476.48 (cuatrocientos setenta y seis punto cuarenta y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$38,404.28 (treinta y ocho mil cuatrocientos cuatro pesos 28/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2011]
9	Amada Dávalos Candelario	436.49 (cuatrocientos treinta y seis punto cuarenta y nueve) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$35,181.09 (treinta y cinco mil ciento ochenta y un pesos 09/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2009]
11	José Francisco Obregón Martínez	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M. N.) [Ciudadano afiliado en 2014]
15	María de Jesús Huerta González	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014]
17	Karla Mariela Carlón Millanes	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014]

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Sanción a imponer
18	Irais Jacqueline Gálvez Botello	642 (seiscientos cuarenta y dos) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$48,464.58 (Cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 58/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2017]
19	Miriam Ortiz Chamorro	515.83 (quinientos quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$41,575.89 (cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 89/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2013]
20	Alma Gabriela Ríos Sánchez	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014]
21	Mario Armando Pamas Reyna	515.83 (quinientos quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$41,575.89 (cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 89/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2013]
22	Anallely Hernández Hernández	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014]
23	José Refugio Tagle Payán	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M. N.) [Ciudadano afiliado en 2014]
24	Juan Arroyo Mendoza	418.89 (cuatrocientos dieciocho punto ochenta y nueve) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$33,762.53 (treinta y tres mil setecientos sesenta y dos pesos 53/100 M. N.) [Ciudadano afiliado en 2008]
27	Brandon Hernández Vázquez	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M. N.) [Ciudadano afiliado en 2014]
29	Araceli Jiménez Díaz	515.83 (quinientos quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$41,575.89 (cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 89/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2013]
30	Florentino Yectli Solís	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M. N.) [Ciudadano afiliado en 2014]
32	Elvira Fernández Cornejo	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014]
34	Erika Jiménez Rueda	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014]
35	Rosa Argentina Guadarrama Rosales	515.83 (quinientos quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$41,575.89 (cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 89/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2013]
36	Jesús Alberto Meráz Navarrete	515.83 (quinientos quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$41,575.89 (cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 89/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2013]
38	María Guadalupe Vargas Durán	418.89 (cuatrocientos dieciocho punto ochenta y nueve) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$33,762.53 (treinta y tres mil setecientos sesenta y dos pesos 53/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2008]
41	Víctor Ignacio González Legarda	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M. N.) [Ciudadano afiliado en 2014]
42	Ariana Itzel Linares Sánchez	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014]
44	Silvia Aguilar Córdova	515.83 (quinientos quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$41,575.89 (cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 89/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2013]
47	Elena Orta Flores	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014]

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Sanción a imponer
48	María Yanelly Palmas Íñiguez	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014]
49	Leonel Efrén Luque González	418.89 (cuatrocientos dieciocho punto ochenta y nueve) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$33,762.53 (treinta y tres mil setecientos sesenta y dos pesos 53/100 M. N.) [Ciudadano afiliado en 2008]
50	Rosario Gómez Ruiz	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014]
51	Ma. Guadalupe García Llamas	642 (seiscientos cuarenta y dos) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$48,464.58 (Cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 58/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2017]
54	Rigoberto Segura Solís.	321.39 (trescientos veintiún punto treinta y nueve) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$25,904.03 (veinticinco mil setecientos novecientos cuatro pesos 03/100 M. N.) [Ciudadano afiliado en 2001]
55	Rogelio Díaz Saavedra	457.68 (cuatrocientos cincuenta y siete punto sesenta y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$36,889.00 (treinta y seis mil ochocientos ochenta y nueve pesos 00/100 M. N.) [Ciudadano afiliado en 2010]
56	Elvia de la Cruz Acosta	515.83 (quinientos quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$41,575.89 (cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 89/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2013]
57	María del Rosario Román Antúnez.	457.68 (cuatrocientos cincuenta y siete punto sesenta y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$36,889.00 (treinta y seis mil ochocientos ochenta y nueve pesos 00/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2010]
58	Jaqueline Alfaro Jiménez	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014]
59	Ma. Anita Gutiérrez Rodríguez	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014]
60	Samuel Evaristo Tapia Rubio	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M. N.) [Ciudadano afiliado en 2014]
62	Graciela Marina Rivera Zamudio	402.80 (cuatrocientos dos punto ochenta) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$32,465.68 (treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 68/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2007]
63	Dionisio Fernández Hernández	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M. N.) [Ciudadano afiliado en 2014]
64	Alicia Sánchez Flores	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014]
65	María Natividad Ruiz Meza	515.83 (quinientos quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$41,575.89 (cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 89/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2013]
66	Martín Dueñas Ortiz	457.68 (cuatrocientos cincuenta y siete punto sesenta y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$36,889.00 (treinta y seis mil ochocientos ochenta y nueve pesos 00/100 M. N.) [Ciudadano afiliado en 2010]
67	Baldomero Cota Montaña	418.89 (cuatrocientos dieciocho punto ochenta y nueve) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$33,762.53 (treinta y tres mil setecientos sesenta y dos pesos 53/100 M. N.) [Ciudadano afiliado en 2008]
68	Erika Susana González Franco	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014]
69	Nora Graciela Reveles Castañeda	558.36 (quinientos cincuenta y ocho punto treinta y seis) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$45,003.81 (cuarenta y cinco mil tres pesos 81/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2015]

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No	Ciudadano	Sanción a imponer
70	María Elena Galván Álvarez	515.83 (quinientos quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$41,575.89 (cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 89/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2013]
71	Rosa Ícela Bustamante Coronel	515.83 (quinientos quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$41,575.89 (cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 89/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2013]
72	Mónica Damiana Leyva Buitimea	515.83 (quinientos quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$41,575.89 (cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 89/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2013]
73	Raquel Salazar Flores	476.48 (cuatrocientos setenta y seis punto cuarenta y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$38,404.28 (treinta y ocho mil cuatrocientos cuatro pesos 28/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2011]
74	Juan Carlos Meza Viveros	457.68 (cuatrocientos cincuenta y siete punto sesenta y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$36,889.00 (treinta y seis mil ochocientos ochenta y nueve pesos 00/100 M. N.) [Ciudadano afiliado en 2010]
75	Jorge Alfredo López Manzanares	436.49 (cuatrocientos treinta y seis punto cuarenta y nueve) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$35,181.09 (treinta y cinco mil ciento ochenta y un pesos 09/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2009]
76	Guadalupe Alejandra Fregoso	418.89 (cuatrocientos dieciocho punto ochenta y nueve) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$33,762.53 (treinta y tres mil setecientos sesenta y dos pesos 53/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2008]
78	Julio Iván Medina Martínez	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M. N.) [Ciudadano afiliado en 2014]
79	Mikhail Tolentino Jiménez	515.83 (quinientos quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$41,575.89 (cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 89/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2013]
81	Cristóbal Hernández Mercado	558.36 (quinientos cincuenta y ocho punto treinta y seis) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$45,003.81 (cuarenta y cinco mil tres pesos 81/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2015]
83	Beatriz Hernández Bello	418.89 (cuatrocientos dieciocho punto ochenta y nueve) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$33,762.53 (treinta y tres mil setecientos sesenta y dos pesos 53/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2008]
86	Verónica Tenorio González	515.83 (quinientos quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$41,575.89 (cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 89/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2013]
90	Juan Carlos Santana Sánchez	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M. N.) [Ciudadano afiliado en 2014]
91	Cirenia Segundo Barrios	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.99 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M. N.) [Ciudadana afiliada en 2014]

CUARTO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7 de la LGIPE, el monto de la multa impuesta al **PT**, será deducido de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su Considerando CUARTO.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

QUINTO. Se vincula al *PT* para que, de ser el caso, en el supuesto que los quejosos continúen en su padrón de militantes, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentó su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, los medios de prueba que amparen el cumplimiento, conforme a lo dispuesto en su Considerando QUINTO.

SEXTO. Tomando en consideración que, en algunos casos, los denunciantes se enteraron que estaban en el padrón de *PT*, y al haber expresado su intención para ser desafiliados del partido, lo que constituye una CANCELACIÓN de sus datos del padrón de miembros; en consecuencia, se dejan a salvo los derechos de los promoventes, a fin de que, en caso de estimarlo pertinente, hagan valer por la vía correspondiente y ante la autoridad competente la violación antes referida.

SÉPTIMO. En caso de que los ciudadanos Verónica Zaleta Chávez, Perla Azenet García Garza, Juan Antonio Meléndez Hernández y María Guadalupe Oliva Fernández, quisieran promover una queja o denuncia por los hechos referidos en su respectivos escritos de alegatos, se dejan a salvo sus derechos para ejercer tal acción, conforme a lo dispuesto en su Considerando SEXTO.

OCTAVO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, previsto en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Notifíquese personalmente a los siguientes ciudadanos:

No.	Ciudadano	No.	Ciudadano
1	Carlos Eduardo Alemán Leal	2	Elizabeth Jiménez Avellaneda
3	Adriana Pérez Gómez	4	Jovana Berenice Castañeda Báez
5	Flor Alicia Duarte Aguilar	6	
7	Karina Rosales Melquiades	8	Juan Carlos Salcido Álvarez
9	Amada Dávalos Candelario	10	Francisca Evelia Ocampo Nava
11	José Francisco Obregón Martínez	12	Verónica Zaleta Chávez
13	Elena Ramírez Guerrero	14	Nubia Selene Alejo Pascacio
15	María de Jesús Huerta González	16	Humbetto Guillén Tamayo
17	Karla Mariela Carlón Millanes	18	Irais Jacqueline Gálvez Botello
19	Miriam Ortiz Chamorro	20	Alma Gabriela Ríos Sánchez
21	Mario Armando Pamas Reyna	22	Anallely Hernández Hernández

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017

No.	Ciudadano
23	José Refugio Tagle Payán
25	Claudia Yuridia Terrazas Abarca
27	Brandon Hernández Vázquez
29	Araceli Jiménez Díaz
31	Yessica Bárcenas Benítez
33	Oliver Juamat Gómez León
35	Rosa Argentina Guadarrama Rosales
37	Ariana María Domínguez Ceniceros
39	Georgina Edith López Sosa
41	Víctor Ignacio González Legarda
43	Rosa Elena González Alemán
45	Juan Carlos Mora García
47	Elena Orta Flores
49	Leonel Efrén Luque González
51	Ma. Guadalupe García Llamas
53	
55	Rogelio Díaz Saavedra
57	María del Rosario Román Antúnez.
59	Ma. Anita Gutiérrez Rodríguez
61	Perla Azenet García Garza
63	Dionisio Fernández Hernández
65	María Natividad Ruiz Meza
67	Baldomero Cota Montaña
69	Nora Graciela Reveles Castañeda
71	Rosa Ícela Bustamante Coronel
73	Raquel Salazar Flores
75	Jorge Alfredo López Manzanares
77	Juan Antonio Meléndez Hernández
79	Mikhail Tolentino Jiménez
81	Cristóbal Hernández Mercado
83	Beatriz Hernández Bello
85	María Guadalupe Oliva Fernández
87	Beatriz Chávez Flores
89	Víctor Manuel Sánchez Rodríguez
91	Juan Carlos Santana Sánchez

No.	Ciudadano
24	Juan Arroyo Mendoza
26	Alejandra García Hernández
28	Richard Wilder Zenteno Grajales
30	Florentino Yectli Solís
32	Elvira Fernández Cornejo
34	Erika Jiménez Rueda
36	Jesús Alberto Meráz Navarrete
38	María Guadalupe Vargas Durán
40	Diana García Mejía
42	Ariana Itzel Linares Sánchez
44	Silvia Aguilar Córdova
46	Gilberta Casilda Vázquez Álvarez
48	María Yanelly Palmas Iñiguez
50	Rosario Gómez Ruiz
52	Aurora Reyes Mejía
54	Rigoberto Segura Solís.
56	Elvia de la Cruz Acosta
58	Jaqueline Alfaro Jiménez
60	Samuel Evaristo Tapia Rubio
62	Graciela Marina Rivera Zamudio
64	Alicia Sánchez Flores
66	Martín Dueñas Ortiz
68	Erika Susana González Franco
70	María Elena Galván Álvarez
72	Mónica Damiana Leyva Buitimea
74	Juan Carlos Meza Viveros
76	Guadalupe Alejandra Fregoso
78	Julio Iván Medina Martínez
80	Josefina Jiménez Jiménez
82	
84	Víctor Manuel Álvarez Martínez
86	Verónica Tenorio González
88	Zacarías Victoriano Chino
90	Cirenia Segundo Barrios

Así como al **PT**, por conducto de su respectivo representante ante este Consejo General; y por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias Secretario del Consejo, corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución identificando en el orden del día con el número de apartado 1.21, que fue reservado por el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, a quien le cedo el uso de la palabra._____

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente._____

Solo para manifestar que retiro la reserva._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias Consejero Electoral Roberto Ruiz. _____

Si no hay otra intervención, Secretario del Consejo, proceda con la votación._____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 1.21._____

Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo._____

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente._____

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG1256/2018) Pto. 1.21_____

INE/CG1256/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ORDINARIO
DENUNCIANTE: DIEGO EDUARDO
VÁZQUEZ URBANO
DENUNCIADO: MORENA

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/DEVU/JD04/QRO/167/2018, INICIADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR DIEGO EDUARDO VÁZQUEZ URBANO, A TRAVÉS DE LA CUAL HIZO DEL CONOCIMIENTO DE ESTA AUTORIDAD, HECHOS PRESUNTAMENTE CONTRAVENTORES DE LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, DERIVADA DE LA PRESUNTA INDEBIDA AFILIACIÓN A *MORENA* Y USO, SIN CONSENTIMIENTO, DE SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 12 de septiembre de dos mil dieciocho.

GLOSARIO

Comisión	La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
COFIPE	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 14 de enero de 2008

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/DEVU/JD04/QRO/167/2018

DEPPP	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
IFE	El otrora Instituto Federal Electoral
Instituto o INE	Instituto Nacional Electoral
Ley de Medios	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
Ley de Partidos	Ley General de Partidos Políticos
LGIPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
MORENA o denunciado	Partido Político Movimiento Regeneración Nacional
Quejoso o denunciante	Diego Eduardo Vázquez Urbano
Reglamento de Quejas	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
Representante	Representante Propietario de MORENA ante Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Sala Superior	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
UTCE	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE

R E S U L T A N D O

I. DENUNCIA. ¹ Mediante oficio INE/JDE04QRO/VS/0196/2018, el Vocal Secretario de la 04 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en el estado de Querétaro hizo del conocimiento a esta autoridad, la denuncia presentada por Diego Eduardo Vázquez Urbano en contra de *MORENA*, por haber sido presuntamente afiliado a dicho partido político sin su consentimiento haciendo para tal fin, uso indebido de sus datos personales; sin embargo, a dicho oficio no se agregó el escrito de queja referido.

¹ Visible a fojas 01 a 05 del expediente

II. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. Con motivo de lo anterior, mediante Acuerdo² de veintinueve de mayo del año en curso, la *UTCE* ordenó la apertura del cuaderno de antecedentes UT/SCG/CA/DEVU/JD04/QRO/35/2018 y requirió a la 04 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto, en el estado de Querétaro, para que informara si Diego Eduardo Vázquez Urbano presentó escrito de queja en contra de *MORENA*, por los hechos denunciados y, en caso afirmativo, remitiera el original del ocurso.

III. CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO. Mediante oficio INE/JDE04QRO/VS/0244/2018³, el Vocal Secretario del órgano subdelegacional mencionado en el antecedente previo, remitió a la *UTCE* el original del escrito de queja⁴ presentado por el quejoso.

IV. CIERRE CUADERNO DE ANTECEDENTES. Derivado de lo anterior, mediante Acuerdo⁵ de once de junio siguiente, la Unidad Técnica ordenó el cierre del cuaderno de antecedentes y la apertura del procedimiento ordinario sancionador en que se actúa, al existir indicios suficientes sobre los hechos constitutivos de la infracción denunciada.

IV. REGISTRO, ADMISIÓN, RESERVA DE EMPLAZAMIENTO Y DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Por acuerdo⁶ de cinco de julio de dos mil dieciocho, la *UTCE* determinó, entre otras cuestiones, registrar la queja de mérito bajo el número de expediente citado al rubro; admitir a trámite la misma, en la vía ordinaria; reservar el emplazamiento, hasta en tanto se contara con elementos suficientes para proveer al respecto; y requerir a la *DEPPP* y a *MORENA*, informaran si el quejoso fue afiliado a dicho Instituto político y, en su caso, la fecha de afiliación.

En torno a ello, es importante señalar que durante la diligencia de notificación del citado proveído, el quejoso manifestó al Vocal Secretario de la 04 Junta Distrital

² Visible a fojas 07 a 11 del expediente

³ Visible a fojas 21 a 22 del expediente

⁴ Visible a foja 23 del expediente

⁵ Visible a fojas 24 a 27 del expediente

⁶ Visible a fojas 35 a 43 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/DEVU/JD04/QRO/167/2018

Ejecutiva de este Instituto en el estado de Querétaro, su negativa para firmar las constancias de la diligencia, debido a que consideraba injusto se sancionara a MORENA, debido a que su afiliación fue voluntaria.

V. CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN. A través de correo electrónico de nueve de julio del año en curso,⁷ el titular de la DEPPP informó a la Unidad Técnica que el denunciante se encuentra afiliado al partido denunciado, desde el veintinueve de abril de dos mil trece.

Por su parte, mediante oficio *REPMORENAINE-386/18*,⁸ de diez de julio del año en curso, el partido denunciado manifestó que el quejoso se encuentra afiliado a dicho instituto político desde el veintinueve de abril de dos mil trece, señalando que no cuenta con la constancia de afiliación respectiva, debido a que el proceso de registro se realiza vía internet.

VI. PREVENCIÓN AL QUEJOSO. Derivado de lo manifestado por Diego Eduardo Vázquez Urbano en la diligencia de notificación del acuerdo de cinco de julio del año en curso, en el sentido que su afiliación a *MORENA* fue consentida, mediante Acuerdo⁹ de seis de agosto del año en curso, la *UTCE* previno al quejoso a efecto de que manifestara si era su deseo desistirse de la queja que motivó el procedimiento en que se actúa, y con ello darlo por concluido.

VII. DESAHOGO DE PREVENCIÓN. Mediante escrito¹⁰ de nueve de agosto de los corrientes, Diego Eduardo Vázquez Urbano manifestó su voluntad de dar por concluido el presente procedimiento sancionador, ratificando que su afiliación a *MORENA* fue consentida.

VIII. ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, toda vez que no había diligencias pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la *Comisión*.

⁷ Impresión es visible a fojas +++ del expediente

⁸ Visible a fojas 56 a 58 del expediente

⁹ Visible a fojas 78 a 81 del expediente

¹⁰ Visible a foja 98 del expediente

IX. SESIÓN DE LA COMISIÓN. En la Octogésima Cuarta Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, la *Comisión* analizó y aprobó el proyecto, por unanimidad de votos de sus integrantes, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto de análisis, consiste en la presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; así como en los diversos 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), t), y u); párrafo 2; 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n); y 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*¹¹, de aplicación ultractiva; la cual se encuentra reproducida en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443, párrafo 1, incisos a) y n); 456, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 25, párrafo 1, incisos a), e), y u); y 29 de la *Ley de Partidos*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte de *MORENA*, en perjuicio de Diego Eduardo Vázquez Urbano.

Ahora bien, conforme al artículo 38, párrafo I, inciso a) y e), del *COFIPE* en relación con el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la *Ley de Partidos*, los partidos políticos deben conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los

¹¹ Publicado el 14 de enero de 2008, en el Diario Oficial de la Federación.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/DEVU/JD04/QRO/167/2018

ciudadanos, correspondiendo al *INE* vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo I, inciso a), 342, párrafo I, inciso a) y n), y 354, párrafo I, inciso a) del *COFIPE*, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho ordenamiento jurídico, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38, párrafo I, inciso a), e), t) y u), del mismo ordenamiento, conductas que en la actualidad se encuentran previstas en los artículos 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b), y 3, párrafo 2, 25, párrafo 1, incisos a), e), t), y u), y 29 de la *Ley de Partidos*, las cuales son sancionables por el *Consejo General*.

En consecuencia, toda vez que corresponde a este órgano superior de dirección conocer de las infracciones a la normatividad electoral y, en su caso, imponer las sanciones atinentes, en el particular, esta autoridad resulta competente para conocer y resolver respecto de la infracción denunciada, atribuida a *MORENA*, consistente, en esencia, en la presunta violación al derecho de libertad de afiliación y utilización indebida de datos personales del quejoso.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017, en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violaciones a la ley.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/DEVU/JD04/QRO/167/2018

- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violaciones a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de militantes.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE* en relación con los diversos 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIPE*, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, segundo párrafo, de la *Constitución*, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO

En el presente asunto se debe subrayar que la falta imputada a MORENA, presuntamente se cometió durante la vigencia del *COFIPE*, puesto que, según lo informado por la *DEPPP* y el partido denunciado, el registro de Diego Eduardo Vázquez Urbano como militante del citado instituto político, supuestamente sucedió el veintinueve de abril de dos mil trece, fecha en la cual se encontraba vigente dicho código.

En este sentido, si de la información que obra en autos se desprende que al momento de la presunta falta se encontraba vigente el *COFIPE*, es claro que este ordenamiento legal debe aplicarse para las cuestiones sustantivas del presente procedimiento, al margen de que la falta hubiese sido advertida y cuestionada una vez que dicha norma fue abrogada por el *LGIPE*, así como que este último ordenamiento sea fundamento para cuestiones procesales o adjetivas.

Lo anterior tomando en consideración la interpretación sistemática, funcional y armónica de los artículos tercero y sexto transitorios del decreto por el que se expidió la *LGIPE*, a lo cual resulta orientadora la jurisprudencia de rubro

RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES, ¹² emitida por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación.

TERCERO. SOBRESEIMIENTO.

En el presente asunto, durante la diligencia de notificación del proveído del cinco de julio de dos mil dieciocho a Diego Eduardo Vázquez Urbano, realizada el trece de julio del mismo año, éste se negó a firmar las constancias respectivas, bajo el argumento de que le parecía injusto se sancionara al partido político denunciado, ya que obró de buena fe y su afiliación fue con consentimiento.

En torno a ello, es importante señalar que el artículo 466, párrafo 3, de la *LGIPE*, establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento de una queja o denuncia deberán ser examinadas de oficio por la Unidad Técnica, sustancialmente por tratarse de una cuestión de orden público.

En el mismo orden de ideas, en términos de lo previsto en los artículos 466, párrafos 1, inciso d) y 2, inciso a), de la *LGIPE*; y 46, párrafos 2, fracción IV y 3, fracción I, del *Reglamento de Quejas*, es causa de improcedencia de una queja, que los hechos denunciados **no constituyan una infracción en materia electoral**; y de sobreseimiento del procedimiento, que **sobrevenga una causa de improcedencia, después de haber sido admitido el procedimiento sancionador correspondiente.**

Dichos preceptos —legal y reglamentario—, en lo que interesa, establecen lo siguiente:

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

“Artículo 466.

1. La queja o denuncia será improcedente cuando:

...

¹² Consultable en el sitio: <https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/1012/1012265.pdf>

d) *Se denuncien actos de los que el Instituto resulte incompetente para conocer; o **cuando los actos, hechos u omisiones denunciados no constituyan violaciones a la presente Ley.***

2. *Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:*

a) **Habiendo sido admitida**, sobrevenga alguna de las causales de improcedencia;

b) ...

c) **El denunciante presente escrito de desistimiento**, siempre y cuando lo exhiba antes de la aprobación del Proyecto de Resolución por parte de la Secretaría y que, a juicio de la misma, o por el avance de la investigación, no se trate de la imputación de hechos graves, ni se vulneren los principios rectores de la función electoral.”

3. *El estudio de las causas de improcedencia o sobreseimiento de la queja o denuncia **se realizará de oficio**. En caso de advertir que se actualiza una de ellas, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva elaborará un Proyecto de Resolución por el que se proponga el desechamiento o sobreseimiento, según corresponda.*

Énfasis añadido.

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral

Artículo 46.

(...)

2. *La queja o denuncia será improcedente cuando:*

(...)

IV. *El Instituto carezca de competencia para conocerlos, o **cuando los actos, hechos u omisiones denunciados no constituyan violaciones a la normativa electoral**. En este caso, se dará vista a la autoridad que resulte competente.*

(...)

3. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

(...)

III. El denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y cuando lo exhiba antes de la aprobación del proyecto y que, a juicio de la Unidad Técnica, o por el avance de la investigación, no se trate de la imputación de hechos graves, ni se vulneren los principios rectores de la función electoral.

Énfasis añadido.

De los preceptos transcritos, se colige que el legislador ordinario determinó que será causa de sobreseimiento de un procedimiento ordinario sancionador que, una vez admitida la queja que le dio origen, se advierta (sobrevenga) por la autoridad competente, la actualización de una causa de improcedencia, entre las cuales se encuentra que los hechos denunciados **no constituyan una infracción a las disposiciones de la materia electoral**, es decir, que no envuelvan la realización de conductas prohibidas o la omisión de las ordenadas por las normas jurídicas que regulan la materia.

En torno a lo anterior, es preciso tener presente que el sobreseimiento o, en su caso, del desechamiento por improcedencia de una queja, es una forma de conclusión anormal del procedimiento administrativo sancionador, que se actualiza cuando existe un obstáculo insuperable para el establecimiento de la relación jurídica procesal (improcedencia), en el primer caso; o cuando, establecida ésta, se vuelve ocioso el dictado de una resolución que decida sobre la controversia planteada (sobreseimiento), en el segundo.

Esto es, el legislador estableció en la LGIPE una serie de supuestos en los que resulta estéril la continuación de la tramitación de un procedimiento. Entre otros, cuando la autoridad competente para resolver un procedimiento sancionador advierte la existencia de una causal de improcedencia, después de entablado el procedimiento.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/DEVU/JD04/QRO/167/2018

Lo anterior obedece a evitar que los órganos del Estado, encargados de administración de justicia, distraigan recursos humanos, financieros y materiales en la emisión de resoluciones que no tendrán un fin práctico, ya sea porque la materia de disputa ha desaparecido, o porque el fallo respectivo sea de imposible ejecución.

En efecto, el objeto central de un procedimiento sancionador, estriba en determinar, en un primer momento, si los hechos denunciados vulneran o no la normatividad electoral y está prevista expresamente como falta por la ley exactamente aplicable al caso (principio de tipicidad); y en una segunda etapa, si la conducta motivo de queja es atribuible al sujeto denunciado (responsabilidad).

Lo anterior es así, atento que, de no ser infractores de la normatividad comicial, aun cuando se demostrara que los hechos denunciados sucedieron en la realidad, y los mismos son atribuibles al denunciado, ello no podría dar lugar a la imposición de una sanción por haberlos realizado.

Esto es, en un procedimiento sancionador electoral —como en cualquiera otro que tenga por objeto la imposición de un reproche por infringir el orden jurídico—, la materia misma del procedimiento estriba en determinar si un sujeto incurrió en una conducta ilegal, como lo puede ser, por ejemplo, que un partido político incorpore como militante a un ciudadano que no consintió libre y voluntariamente adquirir la calidad de militante.

En el caso que nos ocupa, como se dejó sentado en el apartado de antecedentes de la presente Resolución, el trece de julio del año en curso, esta autoridad electoral nacional notificó a Diego Eduardo Vázquez Urbano el proveído de cinco de julio del mismo año, diligencia en la que, según consta en el acta circunstanciada levantada por el funcionario electoral que la practicó, así como en la cédula de notificación respectiva, dicho quejoso manifestó su inconformidad en continuar con presente procedimiento, y con la sanción que en su caso pudiera imponerse al partido denunciado, ya que *el partido obró de buena fe y su afiliación fue con consentimiento*. El contenido de dicha diligencia, en lo que interesa, es del tenor siguiente:

CEDULA DE NOTIFICACIÓN

*“...Por lo que procedí a entender la presente diligencia con el C. Diego Eduardo Vázquez Urbano, mencionándome que se niega a firmar por el **motivo de que es injusto que se sancione al partido político cuando el obro de buena fe porque mi afiliación fue con consentimiento.**”*

RAZÓN DE NOTIFICACIÓN

*... Me constituí en el inmueble ubicado en... a efecto de realizar la notificación del expediente número UT/SCG/Q/DEVU/JD04/QRO/167/2018, de fecha cinco de julio del año en curso... atendiendo el **C. Diego Eduardo Vázquez Urbano**, mostrando su credencial para votar con clave de elector... solicitando que ya no fuera a su domicilio porque ya no atendería las diligencias del procedimiento ordinario, ya que estaba inconforme en llevar acabo esta situación, **ya que es era (SIC) injusto que se sancione al partido político Morena, porque ellos obraron de buena fe y mi afiliación fue con consentimiento***

Con motivo de lo anterior, atento a la trascendencia de la pretensión manifestada por el quejoso en la diligencia citada, cuyo efecto inmediato sería la conclusión del procedimiento sancionador sin entrar al estudio del motivo de queja, y a efecto de tener certidumbre sobre lo expuesto por Diego Eduardo Vázquez Urbano en la diligencia de merito, la Unidad Técnica acordó prevenirlo para que realizara las manifestaciones que a sus intereses conviniera.

Derivado de lo anterior, el nueve de agosto siguiente, Diego Eduardo Vázquez Urbano presentó escrito en el que ratificó lo asentado en las constancias atinentes a la diligencia ya referida, solicitando de nueva cuenta dar por terminado y archivar el presente asunto, por así convenir a sus intereses, tal y como se advierte de la transcripción del mismo, que se inserta enseguida:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/DEVU/JD04/QRO/167/2018

*“Yo Diego Eduardo Vázquez Urbano... **doy por concluido mi participación** a lo que me corresponde a el proceso de anulación de demanda en contra del Partido Movimiento de Regeneración Nacional **señalando nuevamente que mi afiliación a dicho partido fue con consentimiento, razón por la cual a mi parecer resulta injusto que dicho partido político sea sancionado cuando el partido obro de buena Fe**, con ello expreso libremente al agradecer que se respetó mi voz sobre mi inconformidad al demandar a dicho partido”*

Lo anterior, con fundamento en el artículo 461, párrafo 1, de la *LGIFE*, al ser un hecho reconocido expresamente por el propio quejoso y, por tanto, no estar sujeto a prueba, aporta a esta autoridad electoral nacional la certeza necesaria en torno a que la incorporación del quejoso al padrón de militantes de MORENA, sucedió con su consentimiento.

Por tanto, si lo indebido de la afiliación alegada en la denuncia derivaba de que *apareció inscrito indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados de MORENA*; y más tarde —en dos ocasiones ante la Unidad Técnica—, **reconoció explícitamente haber consentido su afiliación**, es claro que los hechos denunciados no constituyen infracción a la normatividad electoral y, en consecuencia, el presente procedimiento ha quedado sin materia, pues la afiliación consentida a un partido político, en modo alguno infringe disposiciones electorales, sino constituye una forma válida de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos de la nación, razón por la cual, resulta inútil la continuación del procedimiento.

Al respecto, resultan orientadoras las razones esenciales de la Jurisprudencia 34/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:

IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA. *El artículo 11, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios Impugnación en Materia Electoral, contiene implícita una causa de improcedencia de los medios*

de impugnación electorales, que se actualiza cuando uno de ellos queda totalmente sin materia. El artículo establece que procede el sobreseimiento cuando la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución o sentencia. Conforme a la interpretación literal del precepto, la causa de improcedencia se compone, a primera vista, de dos elementos: a) que la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque, y b) que tal decisión deje totalmente sin materia el juicio o recurso, antes de que se dicte resolución o sentencia. Sin embargo, sólo el segundo elemento es determinante y definitorio, ya que el primero es instrumental y el otro sustancial; es decir, lo que produce en realidad la improcedencia radica en que quede totalmente sin materia el proceso, en tanto que la revocación o modificación es el instrumento para llegar a tal situación. Ciertamente, el proceso jurisdiccional contencioso tiene por objeto resolver una controversia mediante una sentencia que emita un órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, que resulta vinculatoria para las partes. **El presupuesto indispensable para todo proceso jurisdiccional contencioso está constituido por la existencia y subsistencia de un litigio entre partes**, que en la definición de Carnelutti es el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro, toda vez que esta oposición de intereses es lo que constituye la materia del proceso. Al ser así las cosas, **cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el surgimiento de una solución autocompositiva o porque deja de existir la pretensión o la resistencia, la controversia queda sin materia, y por tanto ya no tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción y preparación de la sentencia y el dictado mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos, mediante una resolución de desechamiento, cuando esa situación se presenta antes de la admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre después.** Como se ve, la razón de ser de la causa de improcedencia en comento se localiza precisamente en que **al faltar la materia del proceso se vuelve ociosa y completamente innecesaria su continuación.** Ahora bien, aunque en los juicios y recursos que en materia electoral se siguen contra actos de las autoridades correspondientes, la forma normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste en la mencionada por el legislador, que es la revocación o modificación del acto impugnado, esto no implica que sea éste el

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/DEVU/JD04/QRO/167/2018

único modo, de manera que cuando se produzca el mismo efecto de dejar totalmente sin materia el proceso, como producto de un medio distinto, también se actualiza la causa de improcedencia en comento.

Énfasis añadido.

Como resultado de lo hasta aquí señalado, y toda vez que se encuentran satisfechos los extremos de la causal de sobreseimiento establecida en los artículos 466, párrafo 2, inciso a) de la *LGIFE*; y 46, párrafo 3, fracción I, del *Reglamento de Quejas*, lo procedente es **SOBRESEER** el presente asunto.

CUARTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN.

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, previsto en el artículo 17 de la *Constitución*, se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación establecido en el artículo 42 de la Ley de Medios.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se **sobresee** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra de *MORENA*, por Diego Eduardo Vázquez Urbano, en términos del Considerando **TERCERO** de esta Resolución.

SEGUNDO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42 de la Ley de Medios.

NOTIFÍQUESE: **Personalmente** a Diego Eduardo Vázquez Urbano y a *MORENA*, a través de su representante propietario ante el Consejo General; **por oficio** al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto; y por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo._____

Pasamos ahora al análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución, identificado en el orden del día con el número de apartado 1.22, que fue reservado tanto por el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, como por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín._____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña._____

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente._____

No reiteraría las consideraciones de mi anterior intervención, del apartado 1.2, simplemente sostendría lo mismo._____

Es cuanto._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias._____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín._____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente._____

Tal como lo señalé en el apartado 1.2, el caso se relaciona, también estamos aquí ante 2 supuestos de ciudadanos que nos señalan que hubo coacción y en el Proyecto de Resolución se señala que como las afiliaciones sucedieron en ciudades distintas no se evidencia que haya una sistematicidad del partido político y creo que ahí hay 2 puntos que son relevantes: 1, para que haya coacción no tiene que haber una conducta sistemática; y 2, me parece que para poder hacer una afirmación de esta naturaleza tendríamos que ver los otros casos porque el punto anterior tenía que ver con el mismo partido político y además la conducta sistemática se puede dar en distintas entidades federativas, los partidos políticos son Partidos Políticos Nacionales, por lo que me parece que eso es algo que no se puede afirmar._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín._____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala._____

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente._____

Esperé este momento porque era un tema conectado, pero sí me parece importante revisar una situación, primero que sí hay unas cargas procesales de las personas que en un primer momento no objetaron las pruebas en un segundo momento, y parece que este es un tema primordial que es: dame los hechos que yo te voy a dar el derecho.____ Si nosotros carecemos de circunstancias, de modo, tiempo y lugar, entonces tenemos un problema para poder dar el inicio a un procedimiento sancionador, de ahí que entienda la posición que se presenta en el Proyecto de Resolución respecto a dejar a salvo los derechos por si quieren precisar circunstancias de modo, tiempo y lugar.____ En el anterior caso, por ejemplo, teníamos a una persona que decía en un principio que no había recibido nada, vuelve a reiterar que no recibió nada y posteriormente dice: “sí, la di porque me dieron una dispensa”, esas circunstancias sí nos ponen en un entredicho para poder dar inicio a un procedimiento sancionador respecto a qué tema le vamos a plantear al partido político para que pueda ser investigado, en qué momento, con qué circunstancias, tenemos por ejemplo “recibí una dispensa, pero en otros me dice que no recibió nada” y aunado a esto a la conducta procesal que se tiene en la que no hay una objeción directa sino que abre otras vertientes, sí es probable que lo hice no me acuerdo en qué momento. _____

Me parece que sí, lo óptimo es si la ciudadana o el ciudadano están interesados en continuar este procedimiento debido a la coacción o dadas para poderle señalar, para poderlo hacer necesita precisar esas circunstancias, de modo, tiempo y lugar para que la autoridad pueda desplegar la facultad investigadora en términos concretos y no dejar abiertas las posibilidades a pesquisas. _____

De ahí que, acompaño a estos Proyectos porque me parece que ya las personas podrían en su uso y ejercicio de sus derechos entablar de manera directa una denuncia para que el partido político también tuviera oportunidad de poder defenderse en esas circunstancias concretas. _____

Sería cuanto Consejero Presidente. _____

Gracias. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. _____

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente. _____

También estaría de acuerdo con el sentido del Proyecto de Resolución, porque como ya dijo la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, son cuestiones procesales y el que afirma también está obligado precisamente a probar, pero, y en este caso, bueno las personas que están objetando a la cédula de afiliación que presentó el Partido del Trabajo, lo que están diciendo no es que no la hayan firmado, supuestamente, sí la firmaron pero bajo ciertas circunstancias y esas circunstancias, tendrían en su caso, que investigarse y por eso se dejan a salvo los derechos de estos ciudadanos para que presenten la queja correspondiente obviamente, con las pruebas respectivas. _____

También intervengo en este asunto, porque de aprobarse los distintos Proyectos, como está sucediendo, falta creo que otro más que se ha reservado, estaríamos ahora resolviendo un total de 210 quejas de afiliaciones indebidas, y de esas 154 resultaron fundadas. _____

Entonces, sí les hago un recordatorio a los partidos políticos de que es necesario que verifiquen cuáles son sus procesos de afiliación, a través de qué documentación, que guarden esa documentación, y que tengan un registro muy exacto de las personas que se están afiliando y de las que se han afiliado al partido político, porque desafortunadamente tenemos muchos casos en relación con este tema. _____

Ya hasta ahora en el Instituto Nacional Electoral se han presentado 20 mil 792 quejas, y de estas hemos resuelto, si es que se aprueban todos los Proyectos de Resolución que estamos viendo el día de hoy, 1 mil 969 quejas; y se han impuesto sanciones que van ya en los 19 millones de pesos a casi todos los partidos políticos de los que tienen el registro a nivel nacional. _____

Entonces, sí me parece que es un problema que debemos de atender, y creo que los partidos políticos tienen que ver la mejor manera de, precisamente, acreditar la afiliación de sus militantes, y de resguardar esa documentación para que ya no siga sucediendo esta circunstancia. _____

Eso sería lo ideal, pero sí quería llamar la atención sobre este punto Consejero Presidente. _____

Gracias. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Adriana Favela. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. _____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente. _____

Hay una cuestión, aquí se señala que se tiene que contar con circunstancias de modo, tiempo y lugar para realizar una investigación, estoy de acuerdo, estas circunstancias de modo, tiempo y lugar se le pueden requerir al ciudadano o a la ciudadana, pero es que se le dejan a salvo sus derechos, entonces puede regresar, nada más que para el momento que regrese, si nosotros identificamos que efectivamente se dio la coacción, que efectivamente se dio el condicionamiento, que efectivamente se acreditan los hechos que denuncia, no puede haber una afiliación indebida porque ya lo estamos declarando infundado. _____

El detalle es que estamos hablando de una conducta infractora distinta, pero que a su vez se convierte en un vicio de la voluntad para esta conducta infractora que hoy estamos analizando, por lo que al existir precisamente una relación entre ambas conductas, lo que corresponde es realizar la investigación y no dejar a salvo los derechos, ¿cómo podemos iniciarlo? No haciendo una pesquisa, preguntándole a los propios ciudadanos cuáles son las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que nos puedan ofrecer los elementos con los que cuenten, para poder llevar a cabo esa investigación. _____

Pero, es que eso es lo que nos permitiría conocer si efectivamente existió una voluntad o no existió una voluntad por parte de las ciudadanas y los ciudadanos que nos están haciendo estos señalamientos. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. _____

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación respectiva. ____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, Consejero Presidente. _____

Como en el caso del Proyecto de Resolución del apartado 1.2 se sometería a consideración una votación en lo general, separando de esta los 2 casos a los cuales se ha hecho referencia y sobre los cuales se propone escindir. _____

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general, el Proyecto de Resolución identificado en el orden del día como el apartado 1.22. _____

Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo si son tan amables. _____

Aprobado por unanimidad en lo general (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello). _____

Ahora someto a su consideración, en lo particular los 2 casos que han sido referidos, primero como vienen en el Proyecto de Resolución. _____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. _____

9 votos. _____

¿En contra? _____

2 votos. _____

Aprobado por 9 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero Presidente. _____

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG1257/2018) Pto. 1.22 _____

INE/CG1257/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO
EXPEDIENTE:
UT/SCG/Q/MRS/JL/PUE/176/2018
DENUNCIANTES: MARTHA RAMÍREZ SALAZAR
Y OTROS
DENUNCIADO: PARTIDO DEL TRABAJO

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/MRS/JL/PUE/176/2018, INICIADO CON MOTIVO DE SENDAS DENUNCIAS EN CONTRA DEL PARTIDO DEL TRABAJO, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN SU AFILIACIÓN INDEBIDA AL CITADO INSTITUTO POLÍTICO Y, EN SU CASO, EL USO NO AUTORIZADO DE SUS DATOS Y DOCUMENTOS PERSONALES

Ciudad de México, 12 de septiembre de dos mil dieciocho.

GLOSARIO	
<i>COFIPE</i>	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>Consejo General</i>	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
<i>Constitución</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<i>DEPPP</i>	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
<i>DERFE</i>	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral
<i>INE</i>	Instituto Nacional Electoral

GLOSARIO	
<i>LGIPE</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>LGPP</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>PT</i>	Partido del Trabajo
<i>Reglamento de Quejas</i>	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>Sala Superior</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>Tribunal Electoral</i>	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

A N T E C E D E N T E

Como se refirió anteriormente, el presente procedimiento deriva de quejas presentadas por catorce (14) ciudadanos, quienes hicieron del conocimiento de esta autoridad hechos presuntamente contraventores de la normatividad electoral, consistentes en la presunta afiliación indebida de los sujetos que enseguida se enlistan, porque no medió consentimiento para ello ni para el uso de sus datos personales, conducta que se atribuye al *PT*.

N°	Ciudadano	Fecha escrito de queja
1	Martha Ramírez Salazar	25 de mayo de 2018
2	María Victoria Cazabal Romero	25 de mayo de 2018
3	Alondra Guadalupe de Lira Mota	30 de mayo de 2018
4	Martha Marlem Ruíz Juárez	30 de mayo de 2018
5	Mariana Landeros Contreras	25 de abril de 2018
6	Blanca Gabriela Ruíz Morán	30 de mayo de 2018
7	Elisandro Candelero Colorado	25 de mayo de 2018
8	Guillermina Ramírez Felipe	23 de mayo de 2018
9	Marcial Herrera Ramírez	21 de mayo de 2018
10	María Magdalena Martínez Martínez	30 de mayo de 2018
11	Janeth Lupana Pinales Arroyo	07 de mayo de 2018
12	Neli Gómez Torres	06 de junio de 2018
13	Alfredo Aguas Reyes	31 de mayo de 2018
14	Silvia Yamel Palacios Cirilo	07 de junio de 2018

R E S U L T A N D O

I. Registro, admisión y reserva de emplazamiento. El veintidós de junio de dos mil dieciocho, el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral instruyó el registro del procedimiento sancionador ordinario, al cual se le asignó la clave **UT/SCG/Q/MRS/JL/PUE/176/2018**, por la presunta afiliación indebida y el uso indebido de datos personales por parte del *PT*.

En el acuerdo en cita, se admitió a trámite el procedimiento de sanción señalado con anterioridad y se reservó lo relativo al emplazamiento de las partes; asimismo, se ordenó la realización de diversas diligencias de investigación.

Finalmente, se ordenó la notificación de dicho acuerdo de admisión al *PT*, así como a los catorce ciudadanos denunciantes.

II. Diligencia de investigación. Con el objeto de proveer lo conducente y para la debida integración del presente asunto, la autoridad instructora determinó requerir a los sujetos que se indican a continuación:

Acuerdo de 22 de junio de 2018 ¹		
Sujeto	Oficio-Fecha de notificación	Oficio-Fecha de respuesta
<i>PT</i>	INE-UT/10123/2018 ² 22 de junio de 2018	REP-PT-INE-PVG-231/2018 ³ 27 de junio de 2018
<i>DEPPP</i>	INE-UT/10124/2018 ⁴ 22 de junio de 2018	Correo electrónico de 26 de junio de 2018 ⁵

III. Emplazamiento.⁶ El trece de julio de dos mil dieciocho, se ordenó el emplazamiento al *PT*, para efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la conducta que se le imputó y aportara los medios de prueba que considerara pertinentes.

¹ Visible a páginas 106-114 del expediente.

² Visible a página 116 del expediente.

³ Visible a páginas 144-146 y anexo de 147-164 del expediente.

⁴ Visible a página 119 del expediente.

⁵ Visible a páginas 120-122 del expediente.

⁶ Visible a páginas 206-213 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MRS/JL/PUE/176/2018

Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito. El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

Acuerdo de 13 de julio de 2018 ⁷		
Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Oficio-Fecha de respuesta
PT INE-UT/11721/2018 ⁸	Citatorio: 18 de julio de 2018. ⁹ Cédula: 19 de julio de 2018. ¹⁰ Plazo: 20 al 26 de julio de 2018.	REP-PT-INE-PVG-340/2018 ¹¹ 26 de julio de 2018

IV. Alegatos.¹² El primero de agosto de dos mil dieciocho se ordenó dar vista a las partes, a efecto de que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera.

El acuerdo de vista para alegatos, se diligenció en los siguientes términos:

Denunciado

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Oficio-Fecha de respuesta
PT INE-UT/12151/2018 ¹³	Citatorio: 02 de agosto de 2018. ¹⁴ Cédula: 03 de agosto de 2018. ¹⁵ Plazo: 06 al 10 de agosto de 2018.	REP-PT-INE-PVG-402/2018 ¹⁶ 10 de agosto de 2018

Denunciantes

No	Quejosos – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
1	Martha Ramírez Salazar INE/JD05/VSD/1618/2018 ¹⁷	Notificación: 08 de agosto de 2018. ¹⁸ Plazo: 09 al 15 de agosto de 2018.	Sin respuesta

⁷ Visible a páginas 206-213 del expediente.

⁸ Visible a página 219 del expediente.

⁹ Visible a páginas 220-222 del expediente.

¹⁰ Visible a páginas 223-224 del expediente.

¹¹ Visible a páginas 235-237 y anexos 238-239 del expediente.

¹² Visible a páginas 240-244 del expediente.

¹³ Visible a página 250 del expediente.

¹⁴ Visible a páginas 251-253 del expediente.

¹⁵ Visible a páginas 254-255 del expediente.

¹⁶ Visible a páginas 303-307 del expediente.

¹⁷ Visible a página 334 del expediente.

¹⁸ Visible a páginas 335-336 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MRS/JL/PUE/176/2018

No	Quejosos – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
2	María Victoria Cazabal Romero INE/JD05/VSD/1619/2018 ¹⁹	Citatorio: 08 de agosto de 2018. ²⁰ Cédula: 09 de agosto de 2018. ²¹ Plazo: 10 al 16 de agosto de 2018.	Sin respuesta
3	Alondra Guadalupe de Lira Mota INE-CD03-ZAC/1377/2018 ²²	Cédula: 16 de agosto de 2018. ²³ Plazo: 17 al 23 de agosto de 2018	Sin respuesta
4	Martha Marlem Ruíz Juárez INE-JD03-ZAC/1378/2018 ²⁴	Cédula: 16 de agosto de 2018. ²⁵ Plazo: 17 al 23 de agosto de 2018	Sin respuesta
5	Mariana Landeros Contreras INE-CD03-ZAC/13375/2018 ²⁶	Cédula: 15 de agosto de 2018. ²⁷ Plazo: 16 al 22 de agosto de 2018.	Sin respuesta
6	Blanca Gabriela Ruíz Morán INE-JD03-ZAC/1376/2018 ²⁸	Cédula: 16 de agosto de 2018. ²⁹ Plazo: 17 al 23 de agosto de 2018.	Sin respuesta
7	Elisandro Candelero Colorado INE/JDE02TAB/4523/18 ³⁰	Cédula: 07 de agosto de 2018. ³¹ Plazo: 08 al 14 de agosto de 2018.	Sin respuesta
8	Guillermina Ramírez Felipe INE/TAM/04JDE/2100/18 ³²	Cédula: 07 de agosto de 2018. ³³ Plazo: 08 al 14 de agosto de 2018.	Sin respuesta
9	Marcial Herrera Ramírez INE/TAM/02JDE/1468/2018 ³⁴	Cédula: 08 de agosto de 2018. ³⁵ Plazo: 09 al 15 de agosto de 2018.	Sin respuesta
10	María Magdalena Martínez Martínez INE/VED/0727/2018 ³⁶	Cédula: 07 de agosto de 2018. ³⁷ Plazo: 08 al 14 de agosto de 2018.	Sin respuesta
11	Janeth Lupana Pinales Arroyo INE/JDE01-ZAC/1792/2018 ³⁸	Estrados: 07 de agosto de 2018. ³⁹ Plazo: 08 al 14 de agosto de 2018	Sin respuesta
12	Neli Gómez Torres INE/COL/JDE02/1600/18 ⁴⁰	Cédula: 07 de agosto de 2018. ⁴¹ Plazo: 08 al 14 de agosto de 2018.	Sin respuesta

¹⁹ Visible a página 327 del expediente.

²⁰ Visible a páginas 330-332 del expediente.

²¹ Visible a páginas 328-329 del expediente.

²² Visible a página 352 del expediente.

²³ Visible a páginas 350-351 del expediente.

²⁴ Visible a página 356 del expediente.

²⁵ Visible a páginas 354-355 del expediente.

²⁶ Visible a página 364 del expediente.

²⁷ Visible a páginas 362-363 del expediente.

²⁸ Visible a página 360 del expediente.

²⁹ Visible a páginas 358-359 del expediente.

³⁰ Visible a página 339 del expediente.

³¹ Visible a página 341 del expediente.

³² Visible a página 311 del expediente.

³³ Visible a página 310 del expediente.

³⁴ Visible a páginas 314-315 del expediente.

³⁵ Visible a páginas 316-318 del expediente.

³⁶ Visible a página 299 del expediente.

³⁷ Visible a páginas 300-301 del expediente.

³⁸ Visible a página 366 del expediente.

³⁹ Visible a página 368 del expediente.

⁴⁰ Visible a página 292 del expediente.

⁴¹ Visible a página 293 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MRS/JL/PUE/176/2018

No	Quejosos – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
13	Alfredo Aguas Reyes JDE01/0908/2018 ⁴²	Cédula: 08 de agosto de 2018. ⁴³ Plazo: 09 al 16 de agosto de 2018	Sin respuesta
14	Silvia Yamel Palacios Cirilo INE/JDE/VS/0877/2018 ⁴⁴	Cédula: 08 de agosto de 2018. ⁴⁵ Plazo: 09 al 16 de agosto de 2018.	Sin respuesta

Es importante precisar que el *PT* proporcionó copia certificada de la siguiente documentación:

- Copia certificada del formato de afiliación de Guillermina Ramírez Felipe, María Magdalena Martínez Martínez, Marcial Herrera Ramírez, Martha Ramírez Salazar, Silvia Yamel Palacios Cirilo y María Victoria Cazabal Romero.⁴⁶
- Documentación relativa al trámite de solicitud de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales en posesión del *PT*, respecto de Alfredo Aguas Reyes y Elisandro Candellero Colorado.⁴⁷

Es por ello que, la autoridad instructora determinó en el acuerdo de alegatos correr traslado con dichas constancias a los ciudadanos referidos.

V. Elaboración de proyecto. En su oportunidad, toda vez que no había diligencias pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la Comisión de Quejas y Denuncias.

VI. Sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias. En la Octogésima Cuarta Sesión Extraordinaria urgente de carácter privado, celebrada el seis de septiembre de dos mil dieciocho, la Comisión de Quejas, aprobó el proyecto por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, presentes en la sesión.

⁴² Visible a página 372 del expediente.

⁴³ Visible a páginas 370-371 del expediente.

⁴⁴ Visible a página 373 del expediente.

⁴⁵ Visible a página 374 del expediente.

⁴⁶ Visible a páginas 158-162 y 238-239 del expediente.

⁴⁷ Visible a páginas 149-157 y 163-164 del expediente.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión de Quejas y Denuncias, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte del *PT*, en perjuicio de los ciudadanos que han sido señalados a lo largo de la presente determinación.

Ahora bien, conforme al artículo 23 del *COFIPE*, los partidos políticos ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en el citado Código, correspondiendo al Instituto Federal Electoral —hoy *INE*— vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n); y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho Código, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38 del dispositivo legal en cita, las cuales son sancionables por el *Consejo General*.

Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443 párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la *LGIPE* y 25 de la *LGPP*, respectivamente.

En consecuencia, siendo atribución del *Consejo General* conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta competente para conocer y resolver respecto de las presuntas infracciones denunciadas en el procedimiento sancionador ordinario, atribuidas al *PT*, derivado, esencialmente, de la afiliación indebida al citado instituto político.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,⁴⁸ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de ciudadanos.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIPE* —los cuales contienen reglas que ya se encontraban previstas en el *COFIPE*, en los artículos 342, párrafo 1, incisos a); 356, 361, 364, 365 y 366—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

⁴⁸ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO

En el presente asunto se debe subrayar que algunas de las presuntas faltas (afiliación indebida) se cometieron **durante la vigencia del COFIPE**, puesto que, en los casos de María Victoria Cazabal Romero, Alondra Guadalupe de Lira Mota, Martha Marlem Ruíz Juárez, Mariana Landeros Contreras, Blanca Gabriela Ruíz Morán, Marcial Herrerra Ramírez, María Magdalena Martínez Martínez, Janeth Lupana Pinales Arroyo, Neli Gómez Torres, Silvia Yamel Palacios Cirilo, Alfredo Aguas Reyes y Elisandro Candellero Colorado, el registro o afiliación de los quejosos al **PT** se realizó antes del treinta y uno de marzo de dos mil catorce, fecha en la cual se encontraba vigente dicho código.

En efecto, de conformidad con lo establecido en el Punto cuarto de los Lineamientos para la Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su registro, aprobados por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG617/2012, de treinta de agosto de dos mil doce, los Partidos Políticos Nacionales debían capturar en el *Sistema de Cómputo desarrollado por la Unidad Técnica de Servicios de Informática*, los datos de todos sus afiliados en el periodo comprendido **entre el uno de abril de dos mil trece y el treinta y uno de marzo de dos mil catorce**, siendo que precisamente el registro realizado en ese periodo corresponden las más recientes fechas de alta de los quejosos en el **PT**.

Por tanto, si al momento de la comisión de las presuntas faltas se encontraba vigente el COFIPE,⁴⁹ es claro que este ordenamiento legal debe aplicarse para las cuestiones sustantivas del presente procedimiento, al margen que las faltas pudieran haber sido advertidas por los quejosos y cuestionadas mediante las quejas que dieron origen al presente asunto, una vez que dicha norma fue abrogada por la LGIPE, así como que este último ordenamiento sea fundamento para cuestiones procesales o adjetivas.

⁴⁹ El COFIPE estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce.

No obstante, para los casos correspondientes a Martha Ramírez Salazar y Guillermina Ramírez Felipe, la normatividad aplicable será la *LGIPE*, toda vez que sus afiliaciones se realizaron durante la vigencia de este cuerpo normativo.

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO

1. LITIS

En el presente asunto se deberá determinar si el *PT* afilió indebidamente o no a los ciudadanos que alegan no haber dado su consentimiento para estar en sus filas, y si violó el derecho de libertad de afiliación en su vertiente de no desafiliación de los ciudadanos, haciendo para ello uso ilegítimo de su información personal, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*.

2. MARCO NORMATIVO

A) Constitución, tratados internacionales y ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

“Artículo 6

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

...

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.”

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la *Constitución*, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un

sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 de la Constitución— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 24/2002, emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES**.⁵⁰

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,⁵¹ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos,

⁵⁰ Consultable en la página del *Tribunal Electoral* o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

⁵¹ Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes —asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

“Artículo 23. Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:

I...

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.”

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales publicada el treinta de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez

Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, inciso a) que era un requisito para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que, en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;
- Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
- Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les

correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGPE*, que es obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su constitución y registro.

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MRS/JL/PUE/176/2018

- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.
- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que, en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la *Constitución* y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los documentos necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos

gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna del *PT*

A efecto de tener claridad acerca del proceso que un ciudadano debe llevar a cabo para convertirse en militante del partido político ahora denunciado, se hace necesario analizar la norma interna del partido político, para lo cual, enseguida se transcribe la parte conducente de los Estatutos del *PT* consiste precisamente en el incumplimiento de sus propias normas de afiliación.⁵²

“Artículo 14.- Son militantes del Partido del Trabajo, los mexicanos, mujeres y hombres, que acepten y suscriban los Documentos Básicos y sus políticas específicas. Deberán participar activa y permanentemente en una instancia del Partido del Trabajo y en una organización social y sus luchas. Deberán aplicar las líneas políticas del Partido, actuar con honestidad y disciplina y pugnar por conservar su unidad. Por tratarse de un Instituto Político Nacional, en el cual sus militantes, afiliados y simpatizantes participan en forma personal y voluntaria, además que el ejercicio de sus actividades políticas se encuentran consideradas en el Artículo 35 Constitucional, como prerrogativas de los ciudadanos; en consecuencia, en ningún momento la militancia de los mismos en el Partido del Trabajo, generará derechos laborales.

...

Artículo 17.- Son afiliados al Partido del Trabajo los mexicanos mujeres y hombres que acepten la Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos y colaboren con algunas tareas del partido, especialmente electorales...

...

⁵² Consultable en el portal oficial del *PT* o bien en la página electrónica: <http://www.partidodeltrabajo.org.mx/estatutos.php#iv>

Artículo 22.- Los requisitos de ingreso de afiliados al Partido del Trabajo son:

...

d) Presentar una solicitud de afiliación por escrito, a la instancia partidaria correspondiente.

e) Presentar una solicitud de ingreso de manera individual, libre y voluntaria ante la Comisión Ejecutiva Municipal, Delegacional, Estatal, del Distrito Federal y Nacional en su caso.

f) Cubiertos los requisitos, el Partido del Trabajo podrá aceptar la solicitud de ingreso y emitir la constancia de afiliación.

...

Artículo 134. Los militantes y afiliados tienen plenamente garantizado el acceder a la información partidaria que no se encuentre clasificada como reservada o confidencial; será puesta a disposición mediante solicitud escrita en la cual se establezca el nombre del solicitante, el carácter de militante, afiliado o simpatizante, el domicilio para recibir notificaciones, la descripción clara y precisa de la información que solicita, y la forma en la cual prefiera le sea entregada, ya sea verbalmente, mediante copias certificadas, o si se tuviere, en medio magnético. Los militantes y afiliados en ejercicio del derecho a la información, tendrán como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra, la estimación, los ataques a la moral, a los derechos de terceros o que pudiesen provocar algún delito. Se considerará información clasificada como reservada o confidencial:

I.- La que determine la Comisión Ejecutiva Nacional con base en los siguientes criterios:

...

d) La información referente a los datos personales de los militantes o afiliados, así como de los candidatos del Partido, será considerada como confidencial.”

De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente:

- El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, fundamentalmente, en la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para decidir **libre e individualmente** si desean formar parte de los partidos y agrupaciones políticas.
- Afiliado o Militante es el ciudadano que libre, voluntaria e individualmente, acude a un partido político para solicitar su incorporación al padrón de militantes respectivo, a través de los documentos aprobados por los órganos partidistas correspondientes.

- Al *PT* podrán afiliarse los ciudadanos que, libre e individualmente, expresen su voluntad de integrarse al partido.
- Uno de los requisitos formales para afiliarse al PT, consiste en presentar una solicitud de afiliación por escrito, a la instancia partidista correspondiente.
- Para obtener la afiliación al partido de referencia, se requiere, además de ser ciudadano mexicano y expresar **su voluntad libre, individual y pacífica de afiliarse** al Partido, **suscribir personalmente** la solicitud de alta como militante.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- En términos de lo previsto en el artículo 16, párrafo segundo de la Constitución, toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán contemplar en sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos.

D) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la *Constitución*, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

3. CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE VIOLACIÓN AL DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante del **PT**, por regla general debe acudir a las instancias partidistas competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso del PT), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del *COFIPE*, precepto que, derivado de la reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la *LGPP*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que además los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y voluntaria.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la *Sala Superior*, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**,⁵³ donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia 21/2013, de rubro **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,⁵⁴ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria⁵⁵ y como estándar probatorio.⁵⁶

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación⁵⁷ ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

⁵³ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

⁵⁴ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.

⁵⁵ Tesis de Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

⁵⁶ Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. Véase la nota 35.

⁵⁷ Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA**, **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO**.

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la *Sala Superior* consideró en la sentencia referida, que, para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciante sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con fundamento en el diverso 441 de la *LGIFE*, lo que implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento ordinario sancionador una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido,

sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberadamente la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

4. HECHOS ACREDITADOS Y PRECISIONES

Como se ha mencionado, las denuncias presentadas por los quejosos, versan sobre la supuesta violación a su derecho de libertad de afiliación, tanto en la modalidad de afiliación indebida de los ciudadanos como de no permitirles ser desafiliados del *PT*, así como la utilización de sus datos personales por dicho partido político.

Ahora bien, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de la infracción denunciada, en los siguientes cuadros se resumirá, por cada uno de los denunciados, la información derivada de la investigación preliminar implementada, así como las conclusiones que, en cada caso, fueron advertidas:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MRS/JL/PUE/176/2018

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP ⁵⁸	Manifestaciones del Partido Político REP-PT-INE-PVG-231/2018 ⁵⁹
1	Martha Ramírez Salazar	25/05/2018 ⁶⁰	Afiliada 27/05/2014	Actualmente afiliada desde 2014 Remite copia certificada ⁶¹ del formato de afiliación ⁶² de la quejosa
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante está registrada en el <i>PT</i>.</p> <p>Además, debe tenerse en cuenta que el <i>PT</i> aportó copia certificada de cédula de afiliación de la ciudadana, sin que haya sido objetada o controvertida por la quejosa, al no dar contestación a la vista que le fue formulada con las constancias atinentes, sobre las cuales no se pronunció.</p> <p>En consecuencia, la conclusión debe ser que NO se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
2	María Victoria Cazabal Romero	23/05/2018 ⁶³	Afiliada 05/01/2014	Actualmente afiliada desde 2014 Remite copia certificada del formato de afiliación ⁶⁴ de la quejosa
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante está registrada en el <i>PT</i>.</p> <p>Además, debe tenerse en cuenta que el <i>PT</i> aportó copia certificada de cédula de afiliación de la ciudadana, sin que hayan sido objetada o controvertida por la quejosa, al no dar contestación a la vista que le fue formulada con las constancias atinentes, sobre las cuales no se pronunció.</p> <p>En consecuencia, la conclusión debe ser que NO se trata de una afiliación indebida.</p>				

⁵⁸ Correo electrónico de 26/06/2018, visible a página 120 a 122 del expediente, por el cual dio respuesta de los catorce ciudadanos que integran el procedimiento en que se actúa.

⁵⁹ Oficio REP-PT-INE-PVG-085/2018 de 25/05/2018, visible a páginas 144 a 146 y anexos de 147 a 164 del expediente, por el cual dio respuesta de los catorce ciudadanos que integran el procedimiento en que se actúa.

⁶⁰ Visible a página 4 del expediente.

⁶¹ Los documentos aportados por el *PT* están certificados por Silvano Garay Ulloa, Secretario Técnico de la Comisión Ejecutiva Nacional del *PT*, quien en términos de lo previsto en los artículos 37 y 37 BIS I, incisos c) y d) del Estatuto vigente de ese instituto político. **“Artículo 37 Bis 1.** La Comisión Ejecutiva Nacional designará, un Secretario Técnico que tendrá las siguientes funciones: ... **c)** Certificar las actas y acuerdos de la Comisión Ejecutiva Nacional y de la Comisión Coordinadora Nacional cuando así se requiera. **d)** Certificar todos los documentos del Partido del Trabajo cuando así se requiera.” Consulta disponible en la dirección electrónica: <http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEPPP/DEPPP-DocumentosBasicos/DEPPP-DocumentosBasicos-pdfs/PT/ESTATUTOSPT.pdf>

⁶² Visible a página 162 del expediente.

⁶³ Visible a página 9 del expediente.

⁶⁴ Visible a página 160 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MRS/JL/PUE/176/2018

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
3	Alondra Guadalupe de Lira Mota	12/05/2018 ⁶⁵	Afiliada 15/01/2014	Actualmente afiliada desde 2014 No adjunta documentación probatoria.

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante está registrada en el *PT*. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.

Es importante referir que si bien en el escrito de desconocimiento de afiliación signado por Alondra Guadalupe de Lira Mota, se asentó: *Yo desconozco estar afiliado (sic) a este partido pues hace años pidieron mi credencial para darme un apoyo un candidato, pero fue sin mi consentimiento*, lo cierto es que el partido político denunciado no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.

Es por ello que la conclusión debe ser que **Sí** se trata de una **afiliación indebida**.

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
4	Martha Marlem Ruíz Juárez	12/05/2018 ⁶⁶	Afiliada 09/10/2013	Actualmente afiliada desde 2013 No adjunta documentación probatoria.

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante está registrada en el *PT*. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.

Es por ello que la conclusión debe ser que **Sí** se trata de una **afiliación indebida**.

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
5	Mariana Landeros Contreras	26/04/2018 ⁶⁷	Afiliada 22/01/2014	Actualmente afiliada desde 2014 No adjunta documentación probatoria.

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante está registrada en el *PT*. Sin embargo, es importante referir que el citado

⁶⁵ Visible a página 15 del expediente.

⁶⁶ Visible a página 21 del expediente.

⁶⁷ Visible a página 26 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MRS/JL/PUE/176/2018

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
<p>instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
6	Blanca Gabriela Ruíz Morán	12/05/2018 ⁶⁸	Afiliada 09/02/2014	Actualmente afiliada desde 2009 No adjunta documentación probatoria.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante está registrada en el <i>PT</i>. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
7	Elisandro Candelero Colorado	25/05/2018 ⁶⁹	Afiliado 03/04/2008 Baja 28/05/2018	Actualmente se dio su baja Afiliado desde 2008 Remite copia certificada del escrito dirigido al quejoso por el cual le notifican que ha sido atendida su solicitud de baja del padrón del <i>PT</i> ⁷⁰
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que el denunciante estuvo registrado en el <i>PT</i>. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Además, si bien el PT aportó documentales para, a su parecer, acreditar la afiliación, lo cierto es que se trata de documentos internos emitidos por dicho partido político, en los que no se aprecia la voluntad de la denunciante de pertenecer al partido, por ende, no son suficientes para acreditar una debida afiliación</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

⁶⁸ Visible a página 36 del expediente.

⁶⁹ Visible a página 46 del expediente.

⁷⁰ Visible a páginas 163 a 164 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MRS/JL/PUE/176/2018

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
8	Guillermina Ramírez Felipe	22/05/2018 ⁷¹	Afiliada 21/04/2014	Actualmente afiliada desde 2014 Remite copia certificada del formato de afiliación ⁷² de la quejosa
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante está registrada en el <i>PT</i>.</p> <p>Además, debe tenerse en cuenta que el <i>PT</i> aportó copia certificada de cédula de afiliación de la ciudadana, sin que hayan sido objetada o controvertida por la quejosa, al no dar contestación a la vista que le fue formulada con las constancias atinentes, sobre las cuales no se pronunció.</p> <p>En consecuencia, la conclusión debe ser que NO se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
9	Marcial Herrera Ramírez	17/05/2018 ⁷³	Afiliado 11/01/2014	Actualmente afiliado desde 2014 Remite copia certificada del formato de afiliación ⁷⁴ del quejoso
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que el denunciante está registrada en el <i>PT</i>.</p> <p>Es importante destacar que el <i>PT</i> aportó copia certificada de cédula de afiliación del ciudadano, sin que haya sido objetada o controvertida por el quejoso, al no dar contestación a la vista que le fue formulada con las constancias atinentes, sobre las cuales no se pronunció.</p> <p>Con base en lo expuesto, la existencia del referido documento, no es un hecho controvertido, al cual debe concederse el valor y eficacia probatoria plenos.</p> <p>No pasa inadvertido que, el quejoso manifestó que se le ofreció un apoyo a su señora madre, consistente en la entrega de una despensa, y por tal motivo otorgó su credencial a su señora madre, sin embargo, no precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que supuestamente se llevó a cabo la afiliación a través de ella, ni tampoco presentó algún medio de prueba para corroborar su dicho.</p> <p>En consecuencia, la conclusión debe ser que NO se trata de una afiliación indebida.</p>				

⁷¹ Visible a página 52 del expediente.

⁷² Visible a página 158 del expediente.

⁷³ Visible a página 59 del expediente.

⁷⁴ Visible a página 159 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MRS/JL/PUE/176/2018

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
10	María Magdalena Martínez Martínez	29/05/2018 ⁷⁵ El ciudadano manifestó que aproximadamente hace tres años presentó solicitud de baja al PT. No presentó medio de prueba para acreditar su dicho.	Afiliada 09/07/2008	Actualmente afiliada desde 2007 Remite copia certificada del formato de afiliación ⁷⁶ de la quejosa

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente en el apartado denominado **CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE VIOLACIÓN AL DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO**, no existe controversia en el sentido de que la afectada fue militante del PT.

En el presente asunto obra escrito signado por María Magdalena Martínez Martínez,⁷⁷ dirigido tanto al PT en el estado de Michoacán como al INE, en el que, esencialmente, manifestó: *En enero de 2007 inicié (sic) a trabajar en el proyecto CENDI del partido del trabajo y en febrero de 2012 se terminó (sic) el contrato y a partir de esa fecha no he tenido algún (sic) vínculo (sic) con el partido del trabajo. Hace aproximadamente 3 años elabore (sic) una solicitud de baja como afiliada del partido. Sin embargo (sic) sigo apareciendo en el sistema del INE como afiliada.*

Por tanto, es de concluirse que, en el caso se denunció una violación al derecho de libre afiliación en perjuicio de la denunciante, en su modalidad de no hacerle efectivo su derecho de desafiliación; toda vez que contrario a la voluntad de la persona de no pertenecer como militante del ente político, el partido lo mantuvo dentro de sus registros de agremiados.

No obstante, si bien la ciudadana manifiesta que **aproximadamente hace tres años presentó escrito de renuncia** a su militancia al PT, lo cierto es que no aportó medio de prueba para dar sustento a su afirmación.

En consecuencia, la conclusión debe ser que **NO** se actualiza una violación al derecho a la libre afiliación en su vertiente de no permitir a una ciudadana ser desafiliada.

⁷⁵ Visible a página 67 del expediente.

⁷⁶ Remitido mediante oficio REP-PT-INE-PVG-340/2018. Visible a páginas 238-239 del expediente.

⁷⁷ Visible a páginas 66-67 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MRS/JL/PUE/176/2018

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
11	Janeth Lupana Pinales Arroyo	07/05/2018 ⁷⁸ (presenta escrito solicitando baja del padrón de afiliados)	Afiliada 14/03/2014	Actualmente afiliada desde 2014 No adjunta documentación probatoria.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante está registrada en el <i>PT</i>. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
12	Neli Gómez Torres	06/06/2018 ⁷⁹	Afiliada 22/11/2011 Baja 06/06/2018	Actualmente no afiliada Afiliación desde 2011 No adjunta documentación probatoria.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante está registrada en el <i>PT</i>. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>				

⁷⁸ Visible a páginas 73 y 77-82 del expediente.

⁷⁹ Visible a página 86 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MRS/JL/PUE/176/2018

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
13	Alfredo Aguas Reyes	31/05/2018 ⁸⁰	Afiliado 29/10/2012 Baja 31/05/2018	Actualmente no afiliado Afiliado desde 2013 Oficio REP-PT-INE-PVG-231/2018, ⁸¹ por el que remitió copia certificada de dos cartas de renuncia de afiliación partidaria al PT. ⁸²
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que el denunciante es afiliado al PT.</p> <p>Ahora bien, obra en el presente asunto copia certificada de dos escritos signados por Alfredo Aguas Reyes.</p> <p>El primero de ellos dirigido tanto al PT en el estado de Tlaxcala como al INE, en el que, esencialmente, manifestó: <i>Por medio del presente documento vengo a reconocer que fue mi voluntad de manera libre, sin coacción ni violencia afiliarme al Partido del Trabajo en 2013, por lo que desde este momento reconozco que si me afilie al Partido del Trabajo en el año que comento.</i></p> <p>El segundo dirigido al Coordinador Estatal de Afiliación del PT en Tlaxcala, en el que se asentó, en lo que interesa, lo siguiente: <i>...manifiesto bajo protesta de decir verdad, libre y voluntaria, que revoco mi deseo de continuar afiliado al partido del trabajo y en este acto renuncio a mi calidad de afiliado. Por lo que solicito que de manera inmediata se proceda a realizar la cancelación de mi afiliación ante el Instituto Nacional Electoral.</i></p> <p>Es importante destacar, que, si bien el quejoso, en la misma fecha, presentó tanto su escrito de queja por afiliación indebida como los escritos dirigidos al PT solicitando su renuncia a dicho instituto político, se considera que deben prevalecer estos últimos.</p> <p>Lo anterior, se considera así, porque en caso de que el ciudadano efectivamente hubiera tenido una inconformidad con el partido político denunciado al haber sido registrado, según su dicho, en contra de su voluntad y de forma indebida en el padrón de militantes del PT, para lo cual, además, utilizaron indebidamente sus datos personales, debió presentar ante ese instituto político una solicitud de desafiliación, haciendo patente su desaprobación por el multicitado registro, circunstancia que no aconteció, ya que con pleno conocimiento de su afiliación firmó una carta de renuncia a la militancia, en la que reconoce su voluntad de afiliarse de forma libre y sin coacción.</p> <p>El PT aportó tal documentación, sin que esta haya sido objetada o controvertida por el quejoso, al no dar contestación a la vista que le fue formulada con las constancias atinentes, sobre la cual no se pronunció.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que NO se trata de una afiliación indebida.</p>				

⁸⁰ Visible a página 94 del expediente.

⁸¹ Visible a páginas 144-146 del expediente.

⁸² Visible a páginas 149 y 155 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MRS/JL/PUE/176/2018

No	Ciudadano	Escrito de desconocimiento de afiliación	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del Partido Político
14	Silvia Yamel Palacios Cirilo	07/06/2018 ⁸³	Afiliado 11/04/2008	Actualmente afiliada desde 2007 Remite copia certificada del formato de afiliación ⁸⁴ de la quejosa
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante está registrada en el <i>PT</i>.</p> <p>Además, debe tenerse en cuenta que el <i>PT</i> aportó copia certificada de cédula de afiliación de la ciudadana, sin que hayan sido objetada o controvertida por la quejosa, al no dar contestación a la vista que le fue formulada con las constancias atinentes, sobre las cuales no se pronunció.</p> <p>En consecuencia, la conclusión debe ser que NO se trata de una afiliación indebida.</p>				

Lo anterior, se sintetiza en los siguientes cuadros:

SIETE CIUDADANOS

CIUDADANOS AFILIADOS INDEBIDAMENTE	
3	Alondra Guadalupe de Lira Mota
4	Martha Marlem Ruíz Juárez
5	Mariana Landeros Contreras
6	Blanca Gabriela Ruíz Morán

CIUDADANOS AFILIADOS INDEBIDAMENTE	
7	Elisandro Candellero Colorado
11	Janeth Lupana Pinales Arroyo
12	Neli Gómez Torres

SEIS CIUDADANOS

CIUDADANOS AFILIADOS DEBIDAMENTE	
1	Martha Ramírez Salazar
2	María Victoria Cazabal Romero
8	Guillermina Ramírez Felipe

CIUDADANOS AFILIADOS DEBIDAMENTE	
9	Marcial Herrera Ramírez
14	Silvia Yamel Palacios Cirilo
13	Alfredo Aguas Reyes

UN CIUDADANO

NO SE VIOLÓ SU DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN EN SU VERTIENTE DE NO PERMITIR A UNA CIUDADANA SER DESAFILIADA	
10	María Magdalena Martínez Martínez

⁸³ Visible a página 102 del expediente.

⁸⁴ Visible a página 161 del expediente.

Por lo que hace a las constancias aportadas por la *DEPPP*, al ser documentos emitidos por autoridades dentro del ámbito de sus facultades, se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del Reglamento de Quejas y Denuncias del *INE*, mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la *LGIPE* y 27, párrafo 2 del Reglamento citado; por tanto, tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

En el mismo tenor, las documentales allegadas al expediente por el partido político denunciado, así como por los denunciantes, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracción II del Reglamento de Quejas y Denuncias del *INE*; por lo que, por sí mismas, carecen de valor probatorio pleno, y sólo alcanzarán ese grado cuando, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, generen convicción en este *Consejo General* sobre la veracidad de los hechos a que se refieren, ello al tenor de lo preceptuado en los artículos 462, párrafo 3 de la *LGIPE*, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención.

5. CASO CONCRETO

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por los quejosos, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5 del *COFIPE*, cuyo contenido se replica en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; esto es, partido político, candidato o inclusive cualquier persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

Ahora bien, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, la autoridad debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

En principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento que formula en contra de la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde al quejoso.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 de la *LGIPE*.

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que contaba con el consentimiento de los quejosos para afiliarlos a su partido político, y no a los ciudadanos que negaron haber solicitado su inclusión en el padrón de militantes del PT.

Así, como vimos, en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, está demostrado a partir de la información proporcionada por la *DEPPP* que los ciudadanos denunciados se encontraron, en ese momento, como afiliados del *PT*.

Por otra parte, el *PT* no demuestra con medios de prueba, que la afiliación respectiva sea el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de los ciudadanos, en los cuales, ellos mismos, *motu proprio*, expresaron su consentimiento y, por ende, proporcionaron sus datos personales a fin de llevar a cabo la afiliación a dicho instituto político.

Debiendo precisar que la carga de la prueba corresponde al *PT*, en tanto que el dicho de los actores consiste en demostrar que no dieron su consentimiento para ser afiliados, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba; por lo que, la defensa del partido político consiste básicamente en afirmar que, si cumplieron las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación tienen el deber de probar esa situación.

Ahora bien, tal y como quedó de manifiesto en el apartado del *MARCO NORMATIVO* de la presente Resolución, así como en el correspondiente a *CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE VIOLACIÓN AL DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO*, la libertad de afiliación en materia político-electoral, es un derecho reconocido y así garantizado para todo ciudadano de nuestro país, al menos desde hace varias décadas, tanto a nivel constitucional como legal, el cual es concebido como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido político, permanecer afiliado a éste, desafiliarse e, incluso, no pertenecer a ninguno. Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección de datos personales e información relacionada con la vida privada de las personas, es igualmente un derecho con una trayectoria de protección por demás lejana.

En este sentido, es pertinente dejar en claro que la garantía y protección a los citados derechos, evidentemente no deriva de disposiciones reglamentarias al interior de los institutos políticos, que prevean como obligación del partido político, la conservación de los expedientes de afiliación de cada miembro, ni tampoco a partir de la emisión de los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, emitidos por el propio *INE* en la Resolución CG617/2012, sino que, como se vio, el derecho tutelado deviene de disposiciones de rango supremo, el cual debe ser tutelado en todo momento, y no a partir de normas internas o reglamentarias que así lo establezcan.

En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos políticos es un derecho de los ciudadanos previsto como garantía constitucional en nuestro país desde hace décadas, también lo es la obligación de los partidos políticos de preservar, y en su caso, de demostrar, en todo momento, que cualquier acto que engendre la voluntad de un ciudadano para formar parte en las filas de un instituto político, esté amparado en el o los documentos que demuestren indefectiblemente el acto previo del consentimiento, siendo **ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no se tiene o tenía el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes.**

Lo anterior, porque, como se mencionó, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que, de manera insuperable, el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En este sentido, toda vez que los denunciantes manifiestan no haber otorgado su consentimiento, que su afiliación se comprobó por la autoridad electoral competente, y que el *PT*, no cumplió su carga probatoria para demostrar que la afiliación sí se solicitó voluntariamente; esta autoridad electoral considera que existe una vulneración al derecho de afiliación de los quejosos y que, intrínsecamente,

para la configuración de esa falta utilizaron sin autorización sus datos personales, lo cual, debe ser considerado por esta autoridad para la imposición de la sanción que, en cada caso, amerite.

Por lo anterior, el estudio de fondo del presente asunto se realizará en dos apartados:

Apartado A. Ciudadanos que fueron afiliados indebidamente al PT

Respecto a los **siete (07) ciudadanos** que se citan a continuación, el presente procedimiento sancionador ordinario es **FUNDADO** en contra del *PT*, por las razones y consideraciones siguientes:

CIUDADANOS AFILIADOS INDEBIDAMENTE	
3	Alondra Guadalupe de Lira Mota
4	Martha Marlem Ruíz Juárez
5	Mariana Landeros Contreras
6	Blanca Gabriela Ruíz Morán

CIUDADANOS AFILIADOS INDEBIDAMENTE	
7	Elisandro Candeler Colorado
11	Janeth Lupana Pinales Arroyo
12	Neli Gómez Torres

Es importante señalar que el *PT* **reconoció la afiliación y vigencia de registro** de militancia de los cinco (05) ciudadanos Alondra Guadalupe de Lira Mota, Martha Marlem Ruíz Juárez, Mariana Landeros Contreras, Blanca Gabriela Ruíz Morán y Janeth Lupana Pinales Arroyo.

No obstante, lo anterior, en ningún caso aportó las cédulas correspondientes, a fin de acreditar ante esta autoridad que el registro de los mismos aconteció de forma libre, individual, voluntaria, personal y pacífica y que además para llevar a cabo ese trámite se cumplió con los requisitos establecidos para tal efecto en su normatividad interna.

En efecto, se considera que, en el caso, el medio de prueba esencial para acreditar la debida afiliación de esos ciudadanos es la cédula o, en su caso, cualquier otra documentación establecida en la normatividad del *PT* en materia de afiliación, en la que constará el deseo de los ciudadanos a afiliarse a ese partido político, al estar impresa de su puño y letra, el nombre, firma, domicilio y datos de identificación, circunstancia que no aconteció, tal y como se estableció en párrafos precedentes.

Respecto a dos (02) ciudadanos, **Elisandro Candelero Colorado y Neli Gómez Torres**, el **PT** argumentó que, a la fecha, sus registros de afiliación han sido **cancelados**, para lo cual, anexó copia certificada del escrito por el que le hizo del conocimiento la baja del padrón de afiliados correspondiente, con excepción de la última de las mencionadas.

Es decir, el **PT** reconoce la afiliación de los ciudadanos en cita, esto es, existe una confesional por parte de dicho instituto político que cobra relevancia al caso, porque corrobora de una manera indirecta que los tres ciudadanos en cita, fueron registrados como militantes del partido político denunciado.

Sin embargo, el partido político denunciado manifestó que, atento a su solicitud de darlo de baja de su padrón, procedió a llevar a cabo el procedimiento de desafiliación correspondiente, es por ello que, al momento, su registro ha sido cancelado.

No obstante, lo anterior, dicho argumento resulta ser intrascendente en el presente asunto, ya que el **PT** no aportó la documentación que acredite la afiliación libre, individual, voluntaria, personal y pacífica de tal sujeto, en los términos establecidos en su normatividad interna.

Es decir, el registro de Elisandro Candelero Colorado y Neli Gómez Torres por parte del **PT** en su padrón de militantes no está controvertido, ni tampoco la circunstancia de que, a la fecha, siga manteniendo o no su registro en dicho instituto político, sino lo que, en el caso se debe determinar si esa afiliación se llevó a cabo o no de forma libre, individual, voluntaria, personal y pacífica.

En mérito de lo anterior, existe evidencia que hace suponer que la afiliación a la que se refiere en este apartado, fue producto de una acción ilegal por parte del **PT**.

Por lo anterior, este órgano colegiado considera pertinente declarar **FUNDADO** el presente procedimiento, pues se concluye que el **PT** infringió las disposiciones electorales tendentes a demostrar la libre afiliación de los **siete (07) ciudadanos**

antes referidos, quienes aparecieron como afiliados a dicho instituto político, por no demostrar el acto volitivo de éstos para permanecer agremiados a ese partido.

En efecto, como se demostró anteriormente, los denunciantes que aparecieron afiliados al *PT*, manifestaron que en momento alguno otorgaron su consentimiento para ello, siendo que dicho instituto político no demostró lo contrario, por lo que se actualiza la violación al derecho fundamental de libre afiliación garantizado desde la Constitución y la ley, según se expuso.

Al respecto, es importante destacar, en lo que interesa, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada el seis de junio de dos mil dieciocho, al resolver el medio de impugnación con clave SUP-RAP 141/2018:⁸⁵

“...si los ciudadanos referidos alegaron que no dieron su consentimiento para pertenecer al partido político recurrente, implícitamente sostienen que no existe la constancia de afiliación atinente; por tanto, los ciudadanos no estaban obligados a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba tampoco son objeto de demostración los hechos negativos, salvo que envuelvan una afirmación.”⁸⁶

Esto es, en el tema que nos ocupa, conforme a lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada en el medio de impugnación SUP-RAP 141/2018, la carga probatoria corresponde a los partidos políticos, en el caso al *PT*, ente político que *se encuentra obligado a demostrar que la solicitud de ingreso al partido fue voluntaria, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad o, en su caso, también tenía la posibilidad de probar sus afirmaciones a través de otros medios de prueba como lo sería documentales que justificaran la participación voluntaria de dichas personas en la vida interna del partido y con carácter de militante, como lo serían, por ejemplo, documentales que evidenciaran el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas, el desempeño de funciones*

⁸⁵ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_judicial/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0141-2018.pdf

⁸⁶ De conformidad con los numerales 461 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación el diverso 441 de ese ordenamiento y 15, segundo párrafo, de la Ley de Medios

*o comisiones partidistas, entre otras,*⁸⁷ circunstancia que, en el particular, no aconteció.

Así pues, el *PT*, en los **siete (07)** casos analizados, no demostró que las afiliaciones se realizaron a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que dichos ciudadanos hayan dado su consentimiento para ser afiliados, ni mucho menos que hayan permitido o entregado datos personales para ese fin, los cuales se estiman necesarios para procesar las afiliaciones, dado que estos elementos se constituyen como insumos obligados para, en su momento, llevar a cabo una afiliación, de ahí que esto sea necesario e inescindible.

Con base en ello, ante la negativa de los denunciantes de haberse afiliado al *PT*, correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de pruebas idóneas, que la afiliación se llevó a cabo a través de los mecanismos legales para ello, en donde constara fehacientemente la libre voluntad de los hoy promoventes, lo que no hizo, siendo que el solo hecho de aparecer en su registro electrónico es insuficiente para acreditar el ejercicio libre, personal y voluntario del derecho de afiliación a dicho instituto político.

Es decir, no basta con que los quejosos aparezcan como afiliados al *PT* en sus registros electrónicos, sino que dicho instituto político debió demostrar, con documentación soporte o pruebas idóneas, que dichas afiliaciones se realizaron de forma libre o voluntaria, o bien, que la aparición del nombre y datos de los quejosos en su padrón de militantes, fue consecuencia de un error involuntario o de alguna circunstancia diversa, pero no lo hizo.

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación al *PT* implica, además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que pudiera haber servido de base o justificación al partido político para afiliar a los ahora quejosos.

⁸⁷ Criterio sostenido en la sentencia dictada en el medio de impugnación SUP-RAP 141/2018.

Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales, tiene íntima vinculación con la afiliación indebida de los **siete (07)** quejosos sobre los que se declara fundado el presente procedimiento, lo cual ya quedó debidamente acreditado y, como consecuencia de ello, merece la imposición de las sanciones que se determinarán en el apartado correspondiente.

Cabe referir que a similar conclusión arribó este Consejo General en la resolución INE/CG120/2018, de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/ALC/CG/39/2017, así como en la resolución INE/CG448/2018, de once de mayo de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2017, las cuales fueron confirmadas por el *Tribunal Electoral* al dictar sentencia el veinticinco de abril y once de mayo de dos mil dieciocho, en los medios de impugnación con clave SUP-RAP-047/2018⁸⁸ y SUP-RAP-137/2018,⁸⁹ respectivamente, derivado de una falta de la misma naturaleza a la que aquí se estudia, en donde se determinó que el uso de datos personales poseía un carácter intrínseco o elemento esencial para la configuración de una afiliación indebida.

Apartado B. Ciudadanos que fueron afiliados debidamente al PT

Respecto a las **seis (06) ciudadanos** que se citan a continuación, el presente procedimiento sancionador ordinario es **INFUNDADO** en contra del *PT*, conforme a los argumentos que se exponen a continuación:

CIUDADANOS AFILIADOS DEBIDAMENTE	
1	Martha Ramírez Salazar
2	María Victoria Cazabal Romero
8	Guillermina Ramírez Felipe

CIUDADANOS AFILIADOS DEBIDAMENTE	
9	Marcial Herrera Ramírez
14	Silvia Yamel Palacios Cirilo
13	Alfredo Aguas Reyes

⁸⁸ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0047-2018.pdf

⁸⁹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0137-2018.pdf

I. EL PT APORTÓ FORMATO DE AFILIACIÓN DE 5 CIUDADANOS

De inicio, es importante destacar que tal y como lo sostuvo la *Sala Superior* en la sentencia dictada en el medio de impugnación SUP-RAP 141/2018, *la prueba directa y que de manera idónea demuestra si una persona está afiliada voluntariamente a un partido es la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político*, siendo que, en el particular, el **PT** aportó copia certificada de **formato de afiliación** de cinco ciudadanos sobre los que se declara infundado el presente procedimiento (Martha Ramírez Salazar, María Victoria Cazabal Romero, Guillermina Ramírez Felipe, Marcial Herrera Ramírez y Silvia Yamel Palacios Cirilo).

Como consecuencia de lo anterior, mediante proveído dictado por la Unidad Técnica, en su calidad de autoridad instructora, se ordenó dar vista a las partes para que formularan los alegatos correspondientes; asimismo, se instruyó correr traslado a cada una con las constancias correspondientes, a fin de que, en ejercicio del derecho de contradicción que les asiste, se pronunciaran sobre las mismas.

Sin embargo, **tales ciudadanos no dieron contestación a la vista para formular alegatos** en el presente asunto y, por tanto, tampoco se opusieron a las constancias exhibidas por el partido para tal efecto, específicamente a la copia certificada de su **formato de afiliación**, signados, respectivamente, por los quejosos; razón por la cual tales documentales debe tenerse por no objetadas o controvertidas por los ciudadanos en cita, sobre las cuales, cada uno de ellos, no se pronunciaron.

II. EL PT APORTÓ ESCRITO DE RENUNCIA PARTIDARIA DE 1 CIUDADANO

Sobre el ciudadano Alfredo Aguas Reyes, el *PT* aportó copia certificada de dos escritos signados, por el quejoso, dirigidos tanto a dicho instituto político, en la entidad federativa correspondiente, como al *INE*, mediante los cuales hizo del conocimiento, esencialmente, lo siguiente:

Por medio del presente documento vengo a reconocer que fue mi voluntad de manera libre, sin coacción ni violencia afiliarme al Partido del Trabajo en 2013, por lo que desde este momento reconozco que si me afilie al Partido del Trabajo en el año que comento.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MRS/JL/PUE/176/2018

...manifiesto bajo protesta de decir verdad, libre y voluntaria, que revoco mi deseo de continuar afiliado al partido del trabajo y en este acto renuncio a mi calidad de afiliado. Por lo que solicito que de manera inmediata se proceda a realizar la cancelación de mi afiliación ante el Instituto Nacional Electoral.

Al respecto, no obstante que, con las constancias atinentes, se le dio vista al sujeto en cita para que formulara alegatos en el presente procedimiento, tal ciudadano **no dio contestación a la vista de mérito** y, por tanto, no se opuso a las constancias exhibidas por el *PT*, es decir, el quejoso, no objetó o controvertió la veracidad y contenido de los escritos.

Por otra parte, se debe precisar que si bien el quejoso, en la misma fecha, presentó, tanto su escrito de queja por afiliación indebida como los escritos dirigidos al *PT* solicitando su renuncia a dicho instituto político, se considera que deben prevalecer estos últimos.

Lo anterior, se considera así, porque en caso de que el ciudadano, efectivamente, hubiera tenido una inconformidad con el partido político denunciado al haber sido registrado, según su dicho, en contra de su voluntad y de forma indebida en el padrón de militantes del *PT*, para lo cual, además, utilizaron indebidamente sus datos personales, el denunciante debió presentar ante ese instituto político una solicitud de desafiliación, haciendo patente su desaprobación por el multicitado registro, circunstancia que no aconteció, ya que con pleno conocimiento de su afiliación, firmó sendas cartas de renuncia a la militancia, en las que reconoce su voluntad de afiliarse de forma libre, sin coacción, presión y sin violencia.

Es por ello que, al no acreditarse una acción ilegal por parte del *PT*, por lo que hace a los **seis (06)** ciudadanos referidos en el presente apartado, el procedimiento sancionador ordinario es **INFUNDADO**.

Apartado C. Ciudadana sobre el que NO se violó su derecho a la libre afiliación en su vertiente de no permitirle ser desafiliada

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MRS/JL/PUE/176/2018

Respecto a la ciudadana **María Magdalena Martínez Martínez**, el presente procedimiento sancionador ordinario es **INFUNDADO** en contra del *PT*, por las razones y consideraciones siguientes:

- La ciudadana reconoce su afiliación al *PT*.
- La ciudadana manifiesta que...*En enero de 2007 inicie (sic) a trabajar en el proyecto CENDI del partido del trabajo y en febrero de 2012 se terminó (sic) el contrato y a partir de esa fecha no he tenido algún (sic) vinculo (sic) con el partido del trabajo. Hace aproximadamente 3 años elabore (sic) una solicitud de baja como afiliada del partido. Sin embargo (sic) sigo apareciendo en el sistema del INE como afiliada;* sin embargo, no presentó medio de prueba para acreditar su dicho.

En el caso en concreto, si bien la quejosa se inconforma por la omisión del *PT* de cancelar su registro como militante en su padrón de afiliados, lo que se traduce en una violación a su derecho a la libre afiliación en su vertiente de no permitirle ser desafiliada, lo cierto es que tal supuesto de infracción no se actualiza en el particular.

Lo anterior, porque de constancias de autos se advierte, por una parte, que la ciudadana manifiesta que su supuesta renuncia al *PT* la presentó aproximadamente hace tres años, sin aportar elemento de prueba para corroborar su afirmación.

Al respecto, es importante precisar que, en el procedimiento administrativo sancionador electoral, entre otros principios, corresponde al quejoso aportar un mínimo de material probatorio que permita a la autoridad electoral determinar si existen indicios sobre la comisión de los hechos denunciados.

En el particular, la quejosa manifestó que aproximadamente hace tres años presentó renuncia a su militancia al *PT*, sin que ofreciera y/o aportara algún medio de prueba a fin de corroborar su dicho, esto es, a fin de proporcionar a esta autoridad electoral indicios mínimos sobre la comisión de la conducta denunciada, consistente en la omisión del partido político denunciado de darla de baja de su registro de militantes.

Lo anterior, tiene sustento en el contenido de la Tesis de Jurisprudencia **16/2011**,⁹⁰ de rubro **PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.**

Es por ello que, en el particular, se considera que no se actualiza una violación al derecho de libre afiliación, en su modalidad de desafiliación y, en consecuencia, tampoco se advierte un uso indebido de datos personales del quejoso.

De ahí que el procedimiento, por cuanto hace a esta ciudadana, deba declararse **INFUNDADO**.

Criterio similar sostuvo este Consejo General en la resolución INE/CG536/2018,⁹¹ de veinte de junio de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/GPM/JL/OAX/28/2018.

CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de las faltas denunciadas, así como la responsabilidad por parte del **PT**, en los casos detallados en el considerando que antecede, procede ahora determinar la sanción correspondiente, en atención a lo dispuesto en el artículo 355, párrafo 5 del **COFIPE**, cuyo contenido se reproduce en el diverso 458, párrafo 5, de la **LGIFE**, relativo a la gravedad de la responsabilidad en que se incurra; el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; y, en su caso, la reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.

En relación con ello, el *Tribunal Electoral* ha sostenido que para individualizar la sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se

⁹⁰ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=16/2011&tpoBusqueda=S&sWord=16/2011>

⁹¹ Consultable en la página de internet del *INE* o bien en la dirección electrónica: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96450/CGor201806-20-rp-16-10.pdf>

deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción electoral.

1. Calificación de la falta

A. Tipo de infracción

Partido	Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
PT	La infracción se cometió por una acción del partido político denunciado, que transgrede disposiciones de la <i>Constitución</i> , del <i>COFIPE</i> , en el momento de su comisión, así como de la <i>LGIPE</i> y la <i>LGPP</i> .	La conducta fue la afiliación indebida y el uso no autorizado de los datos personales de siete (07) ciudadanos por parte del PT	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la <i>Constitución</i> ; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del <i>COFIPE</i> ; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la <i>LGIPE</i> ; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la <i>LGPP</i> .

B. Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o prohibidas.

En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el caso concreto, se acreditó que el **PT** incluyó indebidamente en su padrón de afiliados, a los **siete (07)** ciudadanos quejosos, sin demostrar que para incorporarlos medió la voluntad de éstos de inscribirse como militantes de dicho instituto político,

violentando con ello la norma electoral, en específico las disposiciones precisadas en el recuadro inserto en el subapartado previo.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de los ciudadanos mexicanos, de optar libremente por ser o no militante de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, efectivamente consintieron libremente en ser sus agremiados.

Por otra parte, como se analizó, para la afiliación indebida acreditada en el expediente que se resuelve se usaron los datos personales de los promoventes sin que éstos hubiesen otorgado su consentimiento para ello, lo cual, constituye un elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida.

En efecto, si bien es cierto, a partir de las constancias que obran en autos no está demostrado que los datos personales hubieran sido utilizados con un propósito diverso a la afiliación indebida en sí misma, o bien su difusión frente a terceros, lo es también que dicha información fue necesaria para materializar la incorporación de los datos de los actores al padrón de militantes del partido político denunciado.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo argumentado en la sentencia de siete de junio de dos mil dieciocho dictada por la Sala Superior al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-141/2018,⁹² en la que se estableció, en lo que interesa sobre el tema, lo siguiente:

“...los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de un ciudadano pertenecer a un partido político, no puede alegar que existe uso indebido de sus datos personales porque se consideran públicos.

⁹² Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0141-2018.pdf

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban pertenecer.”

De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción correspondiente al **PT**.

C. Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que el **PT** transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la normativa interna del instituto partido político, y que, tal infracción se cometió en detrimento de los derechos de más de un ciudadano, esta situación no conlleva estar en presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de afiliación a los institutos políticos, quienes incluyeron en su padrón de militantes a los hoy quejosos, sin demostrar el consentimiento previo para ello.

Cabe precisar, que en apartados subsecuentes se analizará a detalle el impacto que tuvo dicha infracción, en atención al número de personas afiliadas indebidamente.

D. Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

- a) **Modo.** En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles al **PT**, consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la *Constitución*; así como 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e) del *COFIPE* disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MRS/JL/PUE/176/2018

a), e), q), t) y u) de la *LGPP*, al incluir en su padrón de afiliados a **siete** ciudadanos, sin tener la documentación soporte que acredite fehacientemente la voluntad de éstos de pertenecer a las filas de ese instituto político.

- b) Tiempo.** En el caso concreto, como se razonó en el considerando que antecede, las afiliaciones indebidas acontecieron en diversos momentos, mismos que se resumen en la tabla siguiente:

No.	Nombre del quejoso	Fecha de Afiliación proporcionada por la DEPPP	Afiliado
3	Alondra Guadalupe de Lira Mota	15/01/2014	Sí
4	Martha Marlem Ruíz Juárez	09/10/2013	Sí
5	Mariana Landeros Contreras	22/01/2014	Sí
6	Blanca Gabriela Ruíz Morán	09/02/2014	Sí
7	Elisandro Candelero Colorado	03/04/2008	Registro cancelado 28/05/2018
11	Janeth Lupana Pinales Arroyo	14/03/2014	Sí
12	Neli Gómez Torres	22/11/2011	Registro cancelado 06/06/2018

- c) Lugar.** Con base en las razones plasmadas en los escritos de denuncias, se deduce que las faltas atribuidas al **PT** se cometieron de la siguiente manera:

No	Ciudadano	Entidad
12	Neli Gómez Torres	Colima

No	Ciudadano	Entidad
7	Elisandro Candelero Colorado	Tabasco

No	Ciudadano	Entidad
3	Alondra Guadalupe de Lira Mota	Zacatecas
4	Martha Marlem Ruíz Juárez	
5	Mariana Landeros Contreras	
6	Blanca Gabriela Ruíz Morán	
11	Janeth Lupana Pinales Arroyo	

E. Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Se considera que en el caso existe una conducta **dolosa** por parte del *PT*, en violación a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e) del *COFIPE*, disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*.

La falta se califica como **dolosa**, por lo siguiente:

- El *PT* es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus constitucional de **entidad de interés público**, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la *Constitución*; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- El *PT* está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 38, párrafo 1, inciso a), del *COFIPE*.
- El de libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la

participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.

- Todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.
- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e), del *COFIPE*.
- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria**.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad

nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.

- La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, es una violación de orden constitucional y legal que **requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento.**

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta se considera dolosa, porque:

- 1) Los quejosos aducen que no solicitaron en momento alguno su registro o incorporación como militantes al *PT*.
- 2) Quedó acreditado que los quejosos aparecieron en el padrón de militantes del *PT*.
- 3) El partido político denunciado no demostró que la afiliación de los quejosos se hubiera realizado a través de los mecanismos legales y partidarios conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y voluntaria de los denunciantes.
- 4) El partido denunciado no demostró ni probó que la afiliación de los quejosos fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun indiciaria, para estimar que la afiliación de los quejosos fue debida y apegada a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.

F. Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el *PT*, se cometió al afiliar indebidamente a **siete (07)** ciudadanos, sin demostrar al acto volitivo de éstos tanto de ingresar o permanecer inscritos en su padrón de militantes como de haber proporcionado sus datos personales para ese fin.

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en garantizar el derecho de libre afiliación y la protección de los datos personales de los ciudadanos mexicanos, mediante la conservación de los documentos atinentes que permitan demostrar el acto de voluntad de los ciudadanos quejosos de militar en los distintos partidos políticos ni para el uso de sus datos personales.

2. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A. Reincidencia

Por cuanto a la **reincidencia** en que pudo haber incurrido el **PT**, este organismo electoral autónomo considera que **no se actualiza**.

De conformidad con el artículo 355 párrafo 6 del *COFIPE*, cuyo contenido reproduce el diverso 458, párrafo 6 de la *LGIPE*, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el mencionado *Código*, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, la *Sala Superior* ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);
2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,

3. Que en ejercicios anteriores el infractor **haya sido sancionado por esa infracción mediante Resolución o sentencia firme.**

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el *Tribunal Electoral*, a través de la Tesis de Jurisprudencia **41/2010**, de rubro **REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.**⁹³

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con anterioridad.

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta.

En este sentido, debe precisarse que, en el presente asunto, no puede considerarse actualizado dicho supuesto por cuanto hace al **PT**, pues en los archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya sancionado a ese instituto político por faltas como la que se sanciona por esta vía, que se hayan dictado con anterioridad a los hechos materia de las presentes denuncias.

B. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

⁹³ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010>

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, pues se comprobó que el *PT* afilió a diversos ciudadanos, sin demostrar contar con la documentación soporte correspondiente, que medió la voluntad de sus agremiados de pertenecer o estar inscritos a dicho instituto político.
- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, de optar por ser o no militante de algún partido político, y la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.
- Para materializar la afiliación indebida de los denunciados, se utilizaron indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para formar el padrón de afiliados del *PT*.
- No existió un beneficio por parte del partido denunciado, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral.

- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso Electoral.
- No existe reincidencia por parte del *PT*.

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente **calificar la falta** en que incurrió el *PT* como de **gravedad ordinaria**, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el partido denunciado dolosamente infringió el derecho de libre afiliación de los hoy quejosos, lo que constituye una violación al derecho fundamental de los ciudadanos reconocidos en la *Constitución*.

Al respecto, es importante precisar que para efectos de determinar el monto de la sanción a imponer se debe diferenciar, **como en el caso acontece, si se está ante una afiliación indebida** o una violación al derecho de libre afiliación en su vertiente de no permitirle al quejoso ser desafiliado.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo resuelto por la *Sala Superior* al dictar sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-141/2018, en la que determinó, esencialmente, lo siguiente:

“Finalmente, para efectos de la sanción a imponer, consideró oportuno diferenciar entre aquellos ciudadanos de los que se utilizaron indebidamente sus datos personales para afiliarlos sin su consentimiento al partido denunciado (once ciudadanos) y aquélla que denunció la presunta indebida afiliación en su vertiente de falta de atención al derecho de desafiliación, puesto que, si bien en ambos casos estamos ante la presencia de una falta grave ordinaria, lo cierto es que en el primero de los supuestos hubieron hechos afirmativos tendentes a menoscabar el derecho de libre afiliación, utilizando datos personales de los afectados y en el segundo, se trata de una omisión, lo cual conlleva que la sanción imponer en cada supuesto sea diferenciada.

Por tal motivo, en el caso concreto, se estima que la motivación expuesta por el Instituto Nacional Electoral fue suficiente para justificar la individualización de la sanción.”

C. Sanción a imponer

Ahora bien, la mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción.

Así, una vez ubicado en el extremo mínimo, se torna necesario apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de ejecución de los hechos, lo que puede constituir un punto de gravitación para transitar del punto inicial, hacia uno de mayor entidad.⁹⁴

El artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIPE*, dispone el catálogo de sanciones a imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México; reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita; y en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la *Constitución* y de la *LGIPE*, con la cancelación de su registro como partido político.

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción (especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción acreditada), así como la conducta realizada por el **PT** se determina que debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida.

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la *LGIPE*, confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada

⁹⁴ Véase la tesis XXVIII/2003 del *Tribunal Electoral*, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MRS/JL/PUE/176/2018

por el sujeto infractor, y que, a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realicen una falta similar.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que ni el *COFIPE* ni la *LGIPE*, determinan pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo establecen las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

Asimismo, es importante tomar en cuenta el número de ciudadanos afiliados indebidamente al **PT**, es decir, los **siete ciudadanos**.

Con base en lo anterior, este Consejo General estima que, derivado de las circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida al **PT**, justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido se replica con el diverso 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGIPE*, consistente en una **MULTA unitaria por cuanto hace a cada uno de los siete (07) ciudadanos sobre quienes se cometió la falta acreditada**, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MRS/JL/PUE/176/2018

de carácter excesivo, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto.

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la sanción a imponer.

En este orden de ideas, es pertinente hacer notar, que ha sido criterio de esta autoridad, en la resolución INE/CG120/2018, de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/ALC/CG/39/2017, así como en la resolución INE/CG448/2018, de once de mayo de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2017, las cuales fueron confirmadas por el *Tribunal Electoral* al dictar sentencia el veinticinco de abril y once de mayo de dos mil dieciocho, en los medios de impugnación con clave

SUP-RAP-047/2018⁹⁵ y SUP-RAP-137/2018,⁹⁶ respectivamente, en los que se sancionó por una afiliación indebida de un ciudadano, en cada caso, con una multa equivalente a 642 (seiscientos cuarenta y dos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento de la comisión de la conducta, sanción que se estima debe tomarse como base para el presente asunto, si se considera que en dichos asuntos se demostró la comisión de una infracción similar a la que acontece en los casos que aquí se resuelven.

⁹⁵ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0047-2018.pdf

⁹⁶ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0137-2018.pdf

En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta causa, en específico **que no se refiere a la interposición de una sola queja, sino de una multiplicidad de quejas y afiliaciones indebidas, las cuales han quedado acreditadas en autos**, es claro que la individualización de la sanción aplicada con motivo de la afiliación indebida de los ciudadanos al partido político denunciado, debe resultar proporcional al número de ciudadanos en cuyo perjuicio se cometió la falta, sin perder de vista las condiciones socioeconómicas del instituto político, y no simplemente, los hechos denunciados y acreditados en el presente procedimiento, a fin de que la sanción que se imponga resulte efectivamente proporcional sin ser excesiva.

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad debe determinar su monto o cuantía, **tomando en cuenta** las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que corresponda.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión que tiene sustento en la Tesis relevante **XXVIII/2003**,⁹⁷ emitida por el *Tribunal Electoral*, misma que a letra establece:

⁹⁷ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003>

“SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.- En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.”

Ahora bien, a juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con base en lo dispuesto en la fracción II del numeral citado, lo procedente es imponer sendas **multas** equivalentes a **seiscientos cuarenta y dos días** de salario mínimo general para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) al **PT, por cada uno de los siete ciudadanos que se considera fueron afiliados indebidamente** y que aparecen en su padrón de afiliados.

Al respecto, es un hecho notorio que se invoca en términos de lo establecido en el artículo 358 del *COFIPE*, cuyo contenido se replica en el diverso 461 de la *LGIFE*, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fija anualmente los montos respectivos, mismos que al ser relacionados con las fechas de afiliación, para obtener la sanción que corresponde por cuanto a cada uno de los ciudadanos indebidamente afiliados, arrojan lo siguiente:

PT		
Total de quejosos	Salario mínimo	Sanción a imponer
Afiliación en 2008		
1	\$52.59	\$33,762.78
Afiliación en 2011		
1	\$59.82	\$38,404.44
Afiliación en 2013		
1	\$64.76	\$41,575.92

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MRS/JL/PUE/176/2018

PT		
Total de quejosos	Salario mínimo	Sanción a imponer
Afiliación en 2014		
4	\$67.29	\$172,800.72
TOTAL		\$286,543.86
[Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].		

Sanción por ciudadano:

No.	Nombre del quejoso	Fecha de Afiliación	Salario Mínimo	Monto por Ciudadano
3	Alondra Guadalupe de Lira Mota	15/01/2014	\$67.29	\$43,199.98
4	Martha Marlem Ruíz Juárez	09/10/2013	\$64.76	\$41,575.89
5	Mariana Landeros Contreras	22/01/2014	\$67.29	\$43,199.98
6	Blanca Gabriela Ruíz Morán	09/02/2014	\$67.29	\$43,199.98
7	Elisandro Candellero Colorado	03/04/2008	\$52.59	\$33,762.53
11	Janeth Lupana Pinales Arroyo	14/03/2014	\$67.29	\$43,199.98
12	Neli Gómez Torres	22/11/2011	\$59.82	\$38,404.28
TOTAL				\$286,542.62
[Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].				

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, pues sin ser gravosa, sí puede inhibir al **PT**, para que en el futuro vigile el cumplimiento de las normas de la materia.

Ahora bien, es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la *Constitución* —efectuado por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones.

En esas condiciones, lo procedente es transformar la sanción que se considera idónea, expresada en salarios mínimos, a Unidades de Medida y Actualización, para lo cual es necesario dividir el monto inicial (seiscientos cuarenta y dos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México multiplicado por el salario mínimo vigente en cada año señalado en el cuadro), entre el valor actual de la Unidad de

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MRS/JL/PUE/176/2018

Medida y Actualización, misma que equivale, para el ejercicio fiscal en curso, a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M. N.).

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 10/2018,⁹⁸ del *Tribunal Electoral*, de rubro y contenido siguiente:

“MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.- De la interpretación sistemática de los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transitorios segundo y tercero del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como 44, párrafo primero, inciso aa), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando en consideración el principio de legalidad que rige en los procedimientos sancionadores, se advierte que el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del ilícito.”

De esta manera, al aplicar la fórmula mencionada, se obtiene lo siguiente:

Salario mínimo vigente	El SMGV se multiplica por 642 días de SMGV en el año	La cifra obtenida de la multiplicación anterior, se divide entre la Unidad de Medida y Actualización vigente de \$80.60	La cifra obtenida de la operación anterior se multiplica por el número de ciudadanos	Sanción a imponer en Unidad de Medida y Actualización
Afiliación en 2008 \$52.59	642	418.89	1	418.89
Afiliación en 2011 \$59.82	642	476.48	1	476.48
Afiliación en 2013 \$64.76	642	515.83	1	515.83
Afiliación en 2014 \$67.29	642	535.98	4	2,143.92

La suma de los montos antes referidos, corresponde a 3,555.12 (tres mil quinientos cincuenta y cinco punto doce) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$286,542.67 (doscientos ochenta

⁹⁸ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=Jurisprudencia,10/2018>

y seis mil quinientos cuarenta y dos pesos 67/100 M.N.) [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].

Debe precisarse que se considera que la multa impuesta al **PT** constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, ya que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, se concluye que la misma resulta eficaz y proporcional.

D. El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la infracción

Se estima que la infracción cometida por parte del **PT**, aun cuando causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de la infracción.

E. Las condiciones socioeconómicas del infractor

Sobre este punto, es preciso señalar que conforme al Acuerdo INE/CG339/2017, emitido por este *Consejo General* el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se estableció que, entre otros, el **PT** recibiría mensualmente en el presente ejercicio, por concepto de financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes, la siguiente cantidad:

SUJETO	Monto del financiamiento público para el sostenimiento de Actividades Ordinarias del mes de septiembre 2018
PT	\$19,737.029.00

Ahora bien, según fue informado por la **DEPPP**, a través del oficio **INE/DEPPP/DE/DPPF/5693/2018**, el monto de la ministración mensual correspondiente a septiembre de dos mil dieciocho, debía ser ajustado en función de las sanciones administrativas pendientes de cubrir por dicho instituto político nacional, por lo cual la cifra total a recibir sería la siguiente:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MRS/JL/PUE/176/2018

SUJETO	IMPORTE DE LA MINISTRACIÓN DE SEPTIEMBRE DE 2018	IMPORTE TOTAL DE LAS SANCIONES SEPTIEMBRE 2018	IMPORTE DE REINTEGRO DE FINANCIAMIENTO LOCAL PARA GASTOS DE CAMPAÑA	IMPORTE NETO DE LA MINISTRACIÓN
PT	\$19,737.029.00	\$9,868.514.00	\$0.00	\$9,868,515.00

F. Impacto en las actividades del sujeto infractor

Derivado de lo anterior, se considera que la multa impuesta al **PT**, no es de carácter gravoso en virtud de que la cuantía líquida, respecto al monto del financiamiento que recibirá por concepto de actividades ordinarias permanentes en el mes de septiembre del año en curso, los siguientes porcentajes:

Partido político	Año	Monto de la sanción por ciudadano. ⁹⁹	Ciudadanos indebidamente afiliados	% de la ministración mensual por ciudadano
PT	2008	\$33,762.53	1	0.34%
	2011	\$38,404.28	1	0.38%
	2013	\$41,575.89	1	0.41%
	2014	\$43,199.98	4	0.43%

Por consiguiente, la sanción impuesta al **PT** no es de carácter gravoso, si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual correspondiente al mes de septiembre de este año.

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción cometida por el **PT** (especialmente los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con el financiamiento que recibe del **INE** para el mes de septiembre de dos mil dieciocho, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno

⁹⁹ Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.

se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político sancionado.

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el partido político de mérito —tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagar sin que ello afecte sus operaciones ordinarias, además de que las sanciones son proporcionales a las faltas cometidas y se estima que, sin resultar excesivas ni ruinosas, pueden generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la *Sala Superior* en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-250/2009¹⁰⁰, es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

QUINTO. CANCELACIÓN DE REGISTRO DE LOS QUEJOSOS COMO MILITANTES. En tal sentido, se tiene que la voluntad de los denunciantes es no pertenecer al *PT*, por lo que se debe vincular al partido político, para que, de ser el caso, en el supuesto que los quejosos continúen en su padrón de militantes, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentaron su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, los medios de prueba que amparen el cumplimiento.

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017,¹⁰¹ de cinco de enero de dos mil diecisiete, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el *INE*, que lo vincule con un instituto político en particular.

¹⁰⁰ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00250-2009.htm>

¹⁰¹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/JDC/2/SUP_2017_JDC_2-626321.pdf

SEXTO. PRONUNCIAMIENTO SOBRE MANIFESTACIONES DE PRESUNTA ENTREGA DE DADIVAS Y/O COACCIÓN ATRIBUIBLE AL PT. No pasa inadvertido para esta autoridad electoral nacional el hecho de que los ciudadanos **Alondra Guadalupe de Lira Mota y Marcial Herrera Ramírez**, al momento de dirigir el escrito de desconocimiento de afiliación al partido denunciado, señalaron de forma individual, que el registro al padrón de militantes del instituto político denunciado, tuvo como origen la presunta promesa de entrega de dadivas o apoyos por parte del PT.

Lo anterior, al manifestar, esencialmente, cada uno de ellos, lo siguiente:

1. Alondra Guadalupe de Lira Mota

Desconocimiento de afiliación:¹⁰² ...*Yo desconozco estar afiliado (sic) a este partido pues hace años pidieron mi credencial para darme un apoyo un candidato, (sic) pero fue sin mi consentimiento.*

2. Marcial Herrera Ramírez

Desconocimiento de afiliación:¹⁰³ ...*Por medio de la presente solicito que me den de baja ya que hace algunos años le preste la credencial a mi sra (sic) madre Tea Ramírez Hernández (sic) con domicilio en la crisantemo # (...) (sic) Col. Villa florida (sic) con tal motivo de que le ayudarían con despensa (sic) accedí para ayudarle sin embargo no se me informo (sic) que me iban a afiliar a dicho partido por lo cual solicito mi baja a la mayor brevedad posible de antemano agradezco su atención y apoyo a esta petición sin más por el momento quedo de ud...*

Esto es, los quejosos en cita, además, de realizar manifestaciones sobre la afiliación al PT, argumentaron, de forma individual, que el registro al padrón de militantes del instituto político denunciado, tuvo como origen la presunta promesa de entrega de dadivas o apoyos, conducta y supuesta infracción distinta a la que, de manera primigenia, se instauró el presente procedimiento sancionador ordinario.

¹⁰² Visible a página 15 del expediente.

¹⁰³ Visible a página 59 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MRS/JL/PUE/176/2018

Al respecto, se debe señalar que, si bien los quejosos realizaron diversas manifestaciones sobre una supuesta entrega de apoyos, dadas o, en su caso, coacción por parte del *PT*, lo cierto es que ninguno de ellos precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que, según su dicho, se llevaron a cabo los hechos que hacen del conocimiento de esta autoridad electoral, ni tampoco presentaron algún medio de prueba para corroborar su dicho.

Esto es, en el caso de **Alondra Guadalupe de Lira Mota**, la ciudadana manifiesta que hace años sin precisar cuántos, le solicitaron la credencial para recibir un apoyo, sin mencionar que tipo de apoyo es el que recibiría, adiciona que el apoyo provendría de un candidato, sin especificar qué o cual candidato, finalizando que ello fue sin su consentimiento, lo que redundaba en falta de claridad pues no especifica si la ausencia de consentimiento, se relaciona con recibir la dádiva, entregar la credencial o apoyar al supuesto candidato.

Es decir, no precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar para el inicio de una investigación en materia electoral.

Por lo que hace a **Marcial Herrera Ramírez**, el denunciante aduce que el registro al *PT*, aconteció derivado de la entrega de su credencial a su señora madre, ello con la esperanza de recibir una dispensa para ella; por lo que accedió a entregarla, y manifiesta que no le informaron que lo iban a afiliar; lo anterior, escapa de elementos en los que se precisen circunstancias de modo, tiempo y lugar en que supuestamente se llevó a cabo el hecho, pues asevera que lo afiliaron a raíz de la entrega de su credencial de elector, sin embargo, no especifica quien llevó a cabo tal afiliación, la fecha en que se sucedió, o los hechos por los que tiene la certeza que así sucedieron las cosas, ni tampoco presentó algún medio de prueba para corroborar su dicho.

Es decir, no indica, en su caso, el nombre del o los sujetos a los que, según su dicho, su señora madre hizo entrega de su credencial para votar, el lugar en donde aconteció tal evento, ni tampoco cómo es que se encuentra su firma en la cédula de afiliación.

En suma, de las manifestaciones de los ciudadanos antes referidos, no hay elementos mínimos indiciarios sobre los cuales esta autoridad pueda seguir una línea de investigación, pues es obligación del quejoso proporcionar los medios probatorios que permitan la implementación de la misma, ya que corresponde a este la carga de la prueba para acreditar su dicho.

Al respecto, debe tenerse presente que en el procedimiento administrativo sancionador las denuncias, deben estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, de lo contrario se imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a quien se le atribuyen los hechos, como se señala en la Tesis de Jurisprudencia **16/2011**,¹⁰⁴ del máximo tribunal de la materia, de rubro **PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.**

Esto es, para el inicio o no de una investigación, se debe ponderar objetiva y razonablemente que los hechos que dan origen a la denuncia y los medios de prueba aportados son de la entidad necesaria para estar en posibilidad de, cuando menos indiciariamente dar curso o servir de base a la investigación de una conducta que se dice, transgrede a la ley electoral o, en el caso, lograr la identificación del o los sujetos responsables.

En efecto, el ejercicio de la atribución de investigación por parte de la autoridad electoral nacional no puede soslayar que corresponde al denunciante aportar datos precisos y elementos de convicción idóneos para acreditar, al menos de manera indiciaria, los hechos denunciados, **así como para estar en posibilidad de identificar a los eventuales responsables de la comisión de los hechos que se dicen infractores de la norma, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que supuestamente se cometieron, cuestión que, como se evidenció con antelación, en el particular no aconteció.**

¹⁰⁴ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=16/2011&tpoBusqueda=S&sWord=16/2011>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MRS/JL/PUE/176/2018

Además, es importante destacar que, en el caso, los ciudadanos quejosos no denuncian de manera directa los hechos anteriormente descritos, sino que estos, como se indicó, derivan de manera indirecta de la investigación y pronunciamiento sobre conducta distinta (afiliación indebida).

Es decir, en el particular, los ciudadanos quejosos no denuncian de manera directa la entrega de dadivas o apoyos o, en su caso, una supuesta coacción atribuible al *PT*, sino que su alegato deriva para acreditar, a su juicio, la afiliación debida o indebida al partido político denunciado.

Finalmente, es importante destacar que, del análisis preliminar a las constancias de autos, respecto a estos ciudadanos y la conducta materia de pronunciamiento en el presente apartado, se advierte lo siguiente:

Ciudadano	Entidad de afiliación	Municipio	Fecha de afiliación	Tipo de apoyo o coacción
Alondra Guadalupe de Lira Mota	Zacatecas	Villa de Cos	15/01/2014	Despensa
Marcial Herrera Ramírez	Tamaulipas	Reynosa	11/01/2014	Despensa

Como se aprecia, los supuestos eventos que hacen del conocimiento los ciudadanos en cita, acontecieron en entidades federativas distintas, lo cual no evidencia, en modo alguno, una sistematicidad en la probable comisión de tales conductas.

Esto es, se considera que de las constancias que obran en autos no es obtener elementos mínimos que permitan inferir siquiera de manera indiciaria la comisión de la conducta que se pretende atribuir al *PT*.

Con base en lo expuesto, ante la falta de precisión de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que supuestamente se cometieron los hechos materia de pronunciamiento, así como de elementos probatorios que den sustento a tales afirmaciones, se considera que no existe razón que justifique el inicio de una investigación por parte de esta autoridad electoral nacional.

No se omite referir que, en el supuesto de que los ciudadanos quisieran promover una queja o denuncia por tales hechos, se dejan a salvo sus derechos para ejercer tal acción, en cuyo caso deberán precisar las circunstancias antes descritas y aportar los medios de prueba que consideren necesarios.

SÉPTIMO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la *Constitución*,¹⁰⁵ se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previsto en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO. Se declara **infundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra del **PT**, al no infringir las disposiciones electorales de libre afiliación de **siete ciudadanos**, en términos de lo establecido en los **Apartados B y C** del Considerando TERCERO de esta Resolución.

SEGUNDO. Se declara **fundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra del **PT**, al infringir las disposiciones electorales de libre afiliación de **siete ciudadanos**, en términos de lo establecido en el **Apartado A** del Considerando TERCERO de esta Resolución.

TERCERO. En términos del Considerando **CUARTO** de la presente Resolución, se impone al **PT**, **una multa por la afiliación indebida de cada uno de los siete ciudadanos**, conforme a los montos que se indican a continuación:

¹⁰⁵ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.**”

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MRS/JL/PUE/176/2018

No	Ciudadano	Importe de la multa
3	Alondra Guadalupe de Lira Mota	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.98 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2014]
4	Martha Marlem Ruíz Juárez	515.83 (quinientas quince punto ochenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$41,575.89 (Cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos 89/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2013]
5	Mariana Landeros Contreras	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.98 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2014]
6	Blanca Gabriela Ruíz Morán	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.98 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2014]
7	Elisandro Candelero Colorado	418.89 (cuatrocientos dieciocho punto ochenta y nueve) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$33,762.53 (treinta y tres mil setecientos sesenta y dos pesos 53/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2008]
11	Janeth Lupana Pinales Arroyo	535.98 (quinientas treinta y cinco punto noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$43,199.98 (Cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos 98/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2014]
12	Neli Gómez Torres	476.48 (cuatrocientos setenta y seis punto cuarenta y ocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$38,404.28 (treinta y ocho mil cuatrocientos cuatro pesos 28/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2011]

CUARTO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7 de la *LGIFE*, el monto de la multa impuesta al **PT**, será deducido de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su Considerando CUARTO.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MRS/JL/PUE/176/2018

QUINTO. Se vincula al *PT* para que, de ser el caso, en el supuesto que los quejosos continúen en su padrón de militantes, **sin mayor trámite**, cancele su registro, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentaron su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, los medios de prueba que amparen el cumplimiento, conforme a lo dispuesto en su Considerando QUINTO.

SEXTO. En caso de que los ciudadanos Alondra Guadalupe de Lira Mota y Marcial Herrera Ramírez, quisieran promover una queja por los hechos referidos en sus respectivos escritos de denuncia, se dejan a salvo sus derechos para ejercer tal acción, conforme a lo dispuesto en su Considerando SEXTO.

SÉPTIMO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, previsto en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Notifíquese personalmente a los ciudadanos que se indican a continuación:

No.	Nombre del quejoso	No.	Nombre del quejoso
1	Martha Ramírez Salazar	8	Guillermina Ramírez Felipe
2	María Victoria Cazabal Romero	9	Marcial Herrera Ramírez
3	Alondra Guadalupe de Lira Mota	10	María Magdalena Martínez Martínez
4	Martha Marlem Ruíz Juárez	11	Janeth Lupana Pinales Arroyo
5	Mariana Landeros Contreras	12	Neli Gómez Torres
6	Blanca Gabriela Ruíz Morán	13	Alfredo Aguas Reyes
7	Elisandro Candelero Colorado	14	Silvia Yamel Palacios Cirilo

Así como al *PT*, por conducto de su respectivo representante ante este *Consejo General*; y por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias Secretario del Consejo, corresponde finalmente el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución identificado en el orden del día con el número de apartado 1.23_____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruíz._____

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Para retirar esa reserva también._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias Consejero Electoral Roberto Ruiz._____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín._____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias Consejero Presidente._____

Este no lo sometí a las votaciones iniciales, aunque tiene que ver con uno de los temas, estamos ante un caso donde se denuncia, que no es la firma del ciudadano la que está asentada en el documento, por lo que, como en otros casos, me parece que se tendría que investigar, sin embargo, no lo separé porque en este caso es un ciudadano el procedimiento, entonces, no hay necesidad de una votación en lo particular, yo lo votaría en contra en lo general._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín._____

Al no haber más intervenciones, procedamos con la votación Secretario del Consejo, por favor._____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 1.23._____ Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables._____

9 votos._____

¿En contra?_____

2 votos._____

Aprobado, por 9 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), y 2 votos en contra (de las Consejeras Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero Presidente._____

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG1258/2018) Pto. 1.23_____

INE/CG1258/2018

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ORDINARIO

DENUNCIANTE: JULIO CÉSAR
ALMANZA VEGA

DENUNCIADO: PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/JCAV/JD08/MICH/204/2018, INICIADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR JULIO CÉSAR ALMANZA VEGA, EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA PROBABLE VIOLACIÓN A SU DERECHO DE LIBERTAD DE AFILIACIÓN Y, EN SU CASO, LA UTILIZACIÓN INDEBIDA DE SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 12 de septiembre de dos mil dieciocho.

G L O S A R I O

Comisión:	La Comisión de Quejas y Denuncias del INE
Consejo General:	Consejo General del INE
Constitución:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DEPPP:	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JCAV/JD08/MICH/204/2018

<i>DERFE:</i>	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE
<i>IFE:</i>	El otrora Instituto Federal Electoral
<i>Instituto o INE:</i>	Instituto Nacional Electoral
<i>Ley de Medios:</i>	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
<i>Ley de Partidos:</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>LGIPE:</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>PVEM:</i>	Partido Verde Ecologista de México
<i>Quejoso o denunciante:</i>	Julio César Almanza Vega
<i>Reglamento de Quejas:</i>	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
Representante	Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante Consejo General del Instituto Nacional Electoral
<i>Sala Superior:</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>UTCE:</i>	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE

R E S U L T A N D O

I. PRESENTACIÓN DE LA QUEJA. El veintisiete de junio del año en curso, se recibió en la *UTCE* el oficio 08-JD-MICH/OF/VS/338/22-06-18, firmado por Eduardo Estrada Yáñez y Jaén Omar Arroyo Benítez, Vocal Ejecutivo y Secretario

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JCAV/JD08/MICH/204/2018

respectivamente, de la 08 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en el estado de Michoacán, a través del cual remite el escrito de queja¹, signado por Julio César Almanza Vega, por el que hace del conocimiento de esta autoridad electoral, posibles indicios de que el *PVEM* la afilió sin su consentimiento y, para ello, utilizó indebidamente sus datos personales.

II. REGISTRO, ADMISIÓN Y RESERVA DE EMPLAZAMIENTO. El cinco de julio del año en curso,² el Titular de la *UTCE* instruyó la integración del expediente en que se actúa, el cual quedó registrado con la clave **UT/SCG/Q/JCAV/JD08/MICH/204/2018**, como un procedimiento sancionador ordinario por la presunta indebida afiliación y el uso indebido de datos personales para ese fin.

En el acuerdo en cita, se admitió a trámite el procedimiento sancionador ordinario señalado con anterioridad y se ordenó reservar lo conducente respecto al emplazamiento, hasta en tanto concluyeran las diligencias de investigación ahí ordenadas.

Al respecto, debe precisarse que la indagatoria ordenada consistió en solicitar a la *DEPPP* informara si el *quejoso* se encontraba registrado dentro del padrón de afiliados del *PVEM* y, de ser el caso, proporcionara la fecha de tal afiliación; asimismo, se le requirió al citado instituto político para que informara si el referido ciudadano aparecía en su padrón de afiliados y, de ser el caso, remitiera copia certificada de las constancias en las que constara el consentimiento del *denunciante*, respecto de la afiliación materia de controversia.

Enseguida se da cuenta de las constancias aportadas en relación con tales requerimientos.

Respuesta de la *DEPPP*:³

Fecha de acuerdo	Oficio <i>UTCE</i>	Respuesta
05/07/2018	INE- UT/11138/2018	Afiliado al <i>PVEM</i> desde el 15/11/2016

¹ Visible a fojas 3 a 6.

² Visible a fojas 8 a 13.

³ Visible a fojas 25 y 26.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JCAV/JD08/MICH/204/2018

Respuesta del PVEM:⁴

Fecha de acuerdo	Oficio <i>UTCE</i>	Respuesta
05/07/2018	INE- UT/11137/2018	Afiliado al PVEM desde el 15/09/2016 Estatus actual CANCELADO Anexó formato de afiliación del ciudadano quejoso.

III. EMPLAZAMIENTO. El trece de julio del año en curso,⁵ se ordenó el emplazamiento al *PVEM*, para efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de la conducta que se le imputó y aportara las pruebas que considerara pertinentes.

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

EMPLAZAMIENTO				
CONSTANCIA CON LA CUAL SE MATERIALIZÓ LA DILIGENCIA	SUJETO EMPLAZADO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE CONTESTACIÓN AL EMPLAZAMIENTO	PRUEBAS OFRECIDAS
INE- UT/11674/2018 ⁶	<i>PVEM</i>	18/julio/18	24/julio/18 ⁷ Mediante escrito, el representante suplente de dicho partido dio respuesta al emplazamiento.	Instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, ambas en todo lo que favorezca a sus intereses y pretensiones.

IV. ALEGATOS. El veinticinco de julio de dos mil dieciocho,⁸ se ordenó dar vista a las partes, a efecto de que en vía de alegatos manifestaran lo que a su derecho conviniera, asimismo, se ordenó dar vista al quejoso con el formato de afiliación, aportado por el partido político, mediante el cual intentó acreditar que la afiliación controvertida se realizó de conformidad con las disposiciones legales.

El acuerdo de vista para alegatos, se diligenció en los siguientes términos:

⁴ Visible a fojas 27 a 37.

⁵ Visible a fojas 38 a 42.

⁶ Visible a foja 58

⁷ Visible a fojas 71 a 86

⁸ Visible a fojas 58 a 60.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JCAV/JD08/MICH/204/2018

CONSTANCIA CON LA CUAL SE MATERIALIZÓ LA DILIGENCIA	SUJETO NOTIFICADO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE CONTESTACIÓN
INE-UT/119592018 ⁹	<i>PVEM</i>	30 de julio de 2018	06 de agosto de 2018 ¹⁰
08-JD-MICH/OF/VS/369/30-07-2018 ¹¹	Julio César Almanza Vega	31 de julio de 2018	03 de agosto de 2018 ¹²

V. ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, toda vez que no había diligencias pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente Proyecto de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la *Comisión*.

VI. SESIÓN DE LA COMISIÓN. En la Octogésima Cuarta Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el seis de septiembre de dos mil dieciocho, la *Comisión de Quejas* analizó y aprobó el proyecto de mérito, por unanimidad de votos de sus integrantes; y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto de análisis en el presente procedimiento sancionador, consiste en la presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b); 3, párrafo 2; 25, párrafo 1, incisos a), e) y u), y 29 de la *Ley de Partidos*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte del *PVEM*, en perjuicio de Julio César Almanza Vega.

⁹ Visible a foja 101.

¹⁰ Visible a fojas 112 a 123

¹¹ Visible a foja 97

¹² Visible a foja 125

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JCAV/JD08/MICH/204/2018

Ahora bien, conforme al artículo 44 párrafo 1, inciso j) de la *LGIPE*, los partidos políticos deben ajustar su conducta a las disposiciones establecidas en la normatividad electoral, correspondiendo al *INE* vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la Ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 442, párrafo 1, inciso a); 443, párrafo 1, incisos a) y n), y 456, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho ordenamiento jurídico, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 25, párrafo 1, incisos a), e) y u), y 29 de la *Ley de Partidos*, así como la infracción a los derechos contenidos en los numerales 2, párrafo 1, inciso b), y 3, párrafo 2, del mismo ordenamiento jurídico, las cuales son sancionables por el *Consejo General*.

En consecuencia, toda vez que corresponde a este órgano superior de dirección conocer de las infracciones a la normatividad electoral y, en su caso, imponer las sanciones atinentes, en el particular, esta autoridad resulta competente para conocer y resolver respecto de la infracción denunciada, atribuida al *PVEM*, consistente, en esencia, en la presunta violación al derecho de libertad de afiliación y utilización indebida de datos personales.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,¹³ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.

¹³ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de militantes.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIPE*, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, segundo párrafo, de la *Constitución*, es decir, con base en el derecho humano a la libre asociación en su vertiente de afiliación política.

SEGUNDO. ESTUDIO DE FONDO

Como ha quedado dicho, el presente asunto derivó de la queja presentada por un ciudadano en contra del *PVEM*, debido, a que dicho partido político afilió al quejoso sin que éste prestara su consentimiento para ello, haciendo para conseguirlo, uso indebido de sus datos personales.

1. EXCEPCIONES Y DEFENSAS

En defensa de sus intereses, el ***PVEM*** manifestó, en esencia, que Julio César Almanza Vega, ejerció de manera libre su derecho de asociación y se afilió al partido político en cita, lo anterior, se puede acreditar con el formato de afiliación remitido a la *UTCE*, el 12 de julio del año en curso, mediante el que se puede observar que contiene la firma autógrafa del ciudadano, lo cual coincide con la identificación oficial que del mismo modo se adjunta, en este sentido, al existir consentimiento expreso, no se ha vulnerado ninguna disposición relacionada con el manejo de datos personales.

Asimismo, el **ciudadano quejoso, Julio César Almanza Vega**, señaló, en síntesis, que el formato de afiliación presentado por el *PVEM*, es un formato absolutamente informal que no prueba en ningún sentido la afiliación alegada, incluso intuye que podría tratarse de una manipulación de sus datos y de su firma, toda vez que no comparte simpatía alguna con el partido político denunciado, finalmente aduce que un solo documento con datos ilegibles no comprueba su afiliación al partido.

Como se observa, las manifestaciones formuladas por el denunciado en defensa de sus intereses tienen que ver con la materia de la controversia y no con cuestiones de índole procesal, que impliquen una cuestión de previo y especial pronunciamiento, razón por la cual serán estudiadas al resolver el caso concreto.

2. FIJACIÓN DE LA LITIS

En el presente asunto se debe determinar si el *PVEM* afilió indebidamente o no al ciudadano que alega no haber dado su consentimiento para estar en sus filas, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *Ley de Partidos*.

3. MARCO NORMATIVO

A) Constitución, Tratados Internacionales y Ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: ...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. *Son derechos del ciudadano:*

...

III. *Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;*

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la *Constitución Federal*, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia **24/2002**, emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES**.¹⁴

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando

¹⁴ Consultable en la página: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JCAV/JD08/MICH/204/2018

se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,¹⁵ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentra consagrado a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la

¹⁵ Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/proclLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes — asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

“Artículo 23. Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:

I...

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JCAV/JD08/MICH/204/2018

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.”

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que, en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;
- Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
- Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y

- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGPE*, que es obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* del *IFE* por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *H. Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su constitución y registro.

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JCAV/JD08/MICH/204/2018

- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.
- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que, en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de

responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cuál, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna del PVEM

Como se ha mencionado anteriormente, la obligación de los partidos políticos de garantizar el derecho de libre afiliación de sus agremiados, deviene de las propias disposiciones constitucionales, legales y convencionales a que se ha hecho referencia párrafos arriba, por tanto, su cumplimiento, en modo alguno, se encuentra sujeto a las disposiciones internas que cada instituto tiene en su haber normativo.

No obstante, a efecto de tener claridad acerca del proceso que un ciudadano debe llevar a cabo para convertirse en militante del partido político ahora denunciado, se hace necesario analizar la norma interna del *PVEM*, para lo cual, enseguida se transcribe la parte conducente de sus Estatutos, en los términos siguientes:¹⁶

Estatuto del Partido Verde Ecologista de México

CAPÍTULO II

De los Procedimientos para Afiliación de sus Militantes, Adherentes y de sus Simpatizantes

Artículo 2.- *El Partido Verde Ecologista de México, está abierto para todos los mexicanos, incluidos los jóvenes que se interesen, respeten y acepten la Declaración de Principios, el Programa de Acción, y los Estatutos del Partido, que colaboren en la defensa y protección del medio ambiente y coincidan con el principio básico de la democracia en el respeto de la decisión de la mayoría.*

Los mexicanos que así lo decidan podrán afiliarse libre e individualmente al Instituto Político de conformidad con las siguientes modalidades:

I.- *Militante, ciudadanos que se valoran como el principal activo del Partido Verde Ecologista de México; con el compromiso y la participación en la toma de decisiones, que contribuyen a definir el proyecto verde ecologista mexicano;*

II.- *Adherente, los mexicanos que contribuyen con el Partido Verde Ecologista de México para la realización de sus fines y objetivos mediante aportaciones intelectuales y de propaganda; y*

III.- *Simpatizante, los mexicanos que mantienen una voluntad activa de colaboración y se inscriben voluntariamente en un registro del correspondiente ámbito territorial; para recibir información de actividades, reuniones y participación en programas.*

La afiliación al Partido Verde Ecologista de México, es individual, personal, intransferible, libre y pacífica. En tal virtud y por tratarse de un Partido Político Nacional, en el cual sus afiliados, militantes, simpatizantes y adherentes participan en forma personal y voluntaria, en el ejercicio de las actividades políticas que se encuentran consideradas en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos

¹⁶ Consultable en la dirección electrónica <http://actores-politicos.ine.mx/docs/actores-politicos/partidos-politicos/nacionales/documentos-basicos/estatutos-generales-pvem.pdf>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JCAV/JD08/MICH/204/2018

Mexicanos, como prerrogativas de los ciudadanos, la simple afiliación a este Instituto Político de ninguna manera podrá generar derechos laborales.

Artículo 3.- *Para ser militante del Partido Verde Ecologista de México, es necesario ser ciudadano mexicano con el compromiso de lograr una sociedad más justa, solidaria e igualitaria, a través de la participación de las ideas y del trabajo, que definan y configuren el proyecto político verde ecologista mexicano de transformación y búsqueda de una sociedad mejor y de una sana relación del hombre con su entorno natural.*

Los militantes del Partido Verde Ecologista de México son aquellos ciudadanos que están en pleno ejercicio de sus derechos políticos y estatutarios y acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

I.- *Estar registrado en el padrón de adherentes por un plazo no menor a dos años plenamente acreditados conforme al capítulo de afiliación de los presentes Estatutos. En los casos de haber sido dirigente, candidato o haber ocupado un cargo de elección popular postulado por otro Instituto Político, el plazo a cumplir no podrá ser inferior a por lo menos tres años a partir de su registro como adherente, salvo haber sido candidato de coalición o candidatura común con el Partido Verde Ecologista de México en cuyo caso el Consejo Político Nacional determinará si queda sin efecto lo previsto en la presente fracción y procede su registro como militante;*

II.- *Adquirir el compromiso de participar en forma permanente y disciplinada en la realización de los objetivos del Partido;*

III.- *Una vez cumplidos los requisitos anteriores y apoyado por un militante, solicitar por escrito su cambio de carácter al Comité Ejecutivo Estatal correspondiente, quien turnará dicha solicitud al Consejo Político Nacional para su aprobación, quien en su caso registrará su inclusión en el padrón nacional de militantes.*

Los objetivos y actividades de los militantes, tienen como meta fundamental: forjar una sólida relación de identificación, de confianza y de credibilidad, con el electorado para hacer efectiva la alternativa de gobierno.

La calidad de militante solo puede ser restringida por incurrir en alguno de los supuestos previstos por el artículo 9, y en los capítulos XI y XII de este cuerpo normativo, previa resolución dictada por la Comisión Nacional de Honor y Justicia o en su caso por la Comisión Estatal de Honor y Justicia las cuales deberán otorgar la garantía de audiencia y cubrir todas las formalidades establecidas en los presentes Estatutos.

...

Artículo 6.- *Podrán afiliarse al Partido las personas que estén ejerciendo algún puesto de elección popular postulados por otro Partido político, ya sea en el ámbito federal, estatal o municipal, según sea el caso, solamente con el carácter de adherente, solicitando por escrito su afiliación al Comité Ejecutivo Estatal de su ámbito territorial, siempre y cuando presente renuncia por escrito al Partido que lo postuló. En el entendido, que la persona que se encuentre en este supuesto, solamente podrá tener el carácter de militante si reúne lo señalado en los presentes Estatutos.*

...

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JCAV/JD08/MICH/204/2018

Artículo 69.- *Facultades del Comité Ejecutivo Estatal y del Distrito Federal, en cada una de las entidades federativas:*

Estará coordinado por el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal, quien será electo por el Consejo Político Estatal de entre uno de sus integrantes.

I.- Administrar los padrones Estatales de adherentes y simpatizantes respectivamente, en la entidad federativa correspondiente;

II.- Registrar a los afiliados que tengan el carácter de adherentes y simpatizantes en el padrón Estatal que corresponda;

...

CAPÍTULO XVIII
Del Registro de Afiliación

Artículo 87.- *El presente capítulo tiene como finalidad regular los procesos de afiliación y participación de los militantes, adherentes y simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México a nivel nacional, estatal, municipal y delegacional.*

Artículo 88.- *El proceso de afiliación es responsabilidad del Consejo Político Nacional, que tiene la obligación de llevarlo a cabo con apego a la normatividad respectiva.*

Artículo 89.- *La administración del proceso de afiliación en materia de captura y expedición de constancias se delegará parcialmente a los Comités Ejecutivos Estatales y del Distrito Federal.*

El formato para la credencial de militante y constancia de adherente será único a nivel nacional y será determinado por el Comité Ejecutivo Nacional.

La credencial de militante tendrá una vigencia máxima de doce meses y deberá refrendarse en todos los casos a más tardar en el mes de febrero de cada año, ante el Comité Ejecutivo Estatal correspondiente con la aprobación del Consejo Político Nacional. El procedimiento de refrendo de credenciales estará condicionado a que el militante se encuentre al corriente en el pago de sus cuotas de aportación.

Las credenciales de militante contendrán sin excepción la firma autógrafa del Secretario Técnico y del Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo Nacional, previa aprobación de la emisión por el Consejo Político Nacional.

Artículo 90.- *El Consejo Político Nacional tomará las medidas pertinentes, para garantizar la adecuada prestación del servicio de afiliación e implementará los mecanismos expeditos para el adecuado desarrollo del proceso.*

Artículo 91.- *De la afiliación de los Militantes; Se consideran militantes del Partido los ciudadanos que cumpliendo con lo establecido por el artículo 3 de los presentes Estatutos, hayan obtenido ese carácter de acuerdo a las disposiciones de este capítulo.*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JCAV/JD08/MICH/204/2018

Se consideran militantes del Partido los ciudadanos que cumpliendo con lo establecido por el artículo 3 de los presentes Estatutos, hayan obtenido ese carácter de acuerdo a las disposiciones de este capítulo.

Artículo 92.- *Para solicitar la credencial como militante, el interesado deberá cumplir la totalidad de los siguientes requisitos:*

I.- *Tener el carácter de adherente con al menos dos años de antigüedad al día de la solicitud, si es que no ha sido dirigente, candidato o haya ocupado un cargo de elección popular postulado por otro Instituto Político, en el caso de que no se cumpliera lo anterior, el plazo no podrá ser inferior a cuatro años a partir de su registro como adherente;*

II.- *Presentarse personalmente ante el Comité Ejecutivo Estatal y entregar la solicitud correspondiente; y*

III.- *Haber participado en alguna de las actividades cívico políticas organizadas por los órganos competentes del Partido.*

Artículo 93.- *El Comité Ejecutivo Estatal que reciba la solicitud de afiliación como militante, entregará al interesado el comprobante correspondiente que será la garantía de su trámite, procediendo a estudiar la solicitud, y en su caso enviarla al Consejo Político Nacional, para su dictaminación.*

Artículo 94.- *El Consejo Político Nacional podrá rechazar cualquier trámite de afiliación como militante, cuando éste implique manipulación interesada, o sea producto de presión, compromiso hacia terceros o promesa de beneficio personal, así como cuando el interesado haya incurrido en cualquiera de los supuestos contenidos en el capítulo XI, De las Sanciones, de los presentes Estatutos.*

Artículo 95.- *El Comité Ejecutivo Estatal correspondiente rechazará las solicitudes cuando:*

I.- *El solicitante no reúna los requisitos establecidos en los Estatutos; o*

II.- *Demuestre que el solicitante ha incurrido en actos de indisciplina o conductas contrarias a los principios del Partido durante el tiempo de su adherencia.*

Artículo 96.- *El Consejo Político Nacional como órgano superior en materia de afiliación, podrá revocar las propuestas de los Comités Ejecutivos Estatales, por incumplimiento a lo señalado en los presentes Estatutos.*

...

Artículo 103.- *Todos los adherentes tendrán una constancia que acredite su afiliación al Partido.*

La constancia de adherente será expedida por el Comité Ejecutivo Estatal, previo acuerdo en sesión del propio Comité.

Artículo 104.- *El registro de los simpatizantes se realizará en las sedes de los Comités Ejecutivos Estatales, comprendiendo por estos a los mexicanos que mantienen una*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JCAV/JD08/MICH/204/2018

voluntad activa de colaboración y se inscriben voluntariamente en un registro del correspondiente ámbito territorial; para recibir información de actividades, reuniones y participación en programas.

Artículo 105.- *De conformidad con lo previsto por el artículo 7, base segunda fracciones III y XIII, de los presentes Estatutos, todos los militantes deberán ratificar su militancia en el proceso que para tal efecto convocará en todo el país el Consejo Político Nacional, lo anterior en el entendido de que de no hacerlo dejarán de tener la calidad de militantes y se les considerará como inicio en la etapa de adherentes. Para poder participar en el proceso de ratificación de militancia se deberá estar al corriente en el pago de las cuotas de militante.*

...

De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente:

- El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, fundamentalmente, en la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para decidir **libre e individualmente** si desean formar parte de los partidos y agrupaciones políticas.
- Afiliado o Militante es el ciudadano que libre, voluntaria e individualmente, acude a un partido político para solicitar su incorporación al padrón de militantes respectivo, a través de los documentos aprobados por los órganos partidistas correspondientes.
- Al *PVEM* podrán afiliarse los ciudadanos que, libre e individualmente, expresen su voluntad de integrarse al partido.
- Para obtener la afiliación al partido de referencia, se requiere, además de ser ciudadano mexicano y expresar **su voluntad libre, individual y pacífica de afiliarse** al Partido, **suscribir personalmente** la solicitud de alta como militante.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.

Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán contemplar en sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos.

D) Protección de datos personales

De los artículos 6, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

E) Carga y estándar probatorio sobre indebida afiliación a un partido político

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante del *PVEM*, por regla general debe acudir a las instancias partidistas competentes, **suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación**, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso particular el *PVEM*), **tienen la carga de conservar y resguardar**, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliados al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 párrafo 1, inciso c), de la *Ley de Partidos*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JCAV/JD08/MICH/204/2018

deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de las constancias idóneas para ese fin, y que los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos con esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y voluntaria.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir

del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la Sala Superior, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**,¹⁷ donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Jurisprudencia 21/2013, de rubro: **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,¹⁸ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria¹⁹ y como estándar probatorio²⁰.

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación²¹ ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

¹⁷ http://www.te.gob.mx/Informacion_judiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

¹⁸ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60

¹⁹ Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

²⁰ Véase la jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. ²² Véase la nota 35.

²¹ Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO**.

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la Sala Superior consideró en la sentencia referida que, para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la *Ley de Medios*, con fundamento en el diverso 441 de la *LGIPE*, lo que implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera **idónea** demuestra que una persona está afiliado voluntariamente a un partido **es la constancia de inscripción respectiva**, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento sancionador ordinario, una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino que conducen a

que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

Al respecto, la Sala Superior sostuvo que **si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante**, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales **que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo**; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que **de manera insuperable** el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad de conocimiento a

justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

Otro aspecto importante a tomar en consideración, radica en que, si el partido político cumple con la carga probatoria que corresponde a su afirmación en el sentido de que la afiliación cuestionada estuvo precedida del consentimiento del quejoso, es decir, si exhibe prueba suficiente sobre la legitimidad de la afiliación motivo de queja, debe considerarse que prevalece el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio.

Al respecto, cabe destacar que, si la autenticidad o el contenido de dicho documento es cuestionado por el quejoso, se debe estar a las disposiciones contenidas en la *LGPE* y el *Reglamento de Quejas y Denuncias*, las cuales aluden a las reglas que deben observarse tratándose de la objeción de documentos, como parte del derecho contradictorio que les asiste a las partes, de oponerse o refutar las pruebas que ofrezcan o que se allegue la *UTCE* durante la secuela de un procedimiento ordinario sancionador.

Así, el artículo 24 del citado cuerpo normativo establece que:

- 1. Las partes podrán objetar las pruebas ofrecidas durante la sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores **ordinario** y especial, siempre y cuando se realice antes de la audiencia de desahogo.*
- 2. Para los efectos de lo señalado en el párrafo que antecede, las partes podrán objetar la autenticidad de la prueba o bien su alcance y valor probatorio **debiendo indicar** cuál es el aspecto que no se reconoce de la prueba o por qué no puede ser valorado positivamente por la autoridad, esto es, el motivo por el que a su juicio no resulta idóneo para resolver un punto de hecho.*

3. Para desvirtuar la existencia o verosimilitud de los medios probatorios ofrecidos, no basta la simple objeción formal de dichas pruebas, sino que es necesario señalar las razones correctas en que se apoya la objeción y **aportar elementos idóneos para acreditarlas, mismos que tenderán a invalidar la fuerza probatoria de la prueba objetada.**

Énfasis añadido

Esto es, de conformidad con el precepto reglamentario previamente transcrito, **no basta con objetar de manera formal el medio de prueba ofrecido por el partido político para desvirtuar la existencia o verosimilitud de la constancia de afiliación, sino que es necesario señalar las razones correctas en que se apoya la objeción y, también, aportar en el momento procesal oportuno, los elementos idóneos para acreditar su objeción.**

Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia 4/2005²² de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes:

DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y PUEBLA, ESTA ÚLTIMA ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1998). En términos de lo dispuesto por los artículos 324 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 330 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, los documentos privados provenientes de las partes deben ser reconocidos expresa o tácitamente para que adquieran el valor probatorio que las propias legislaciones les otorgan. Ahora bien, **esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio reiterado de que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que es necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción.** Debido a que en las legislaciones adjetivas en cuestión no se establece ninguna regla específica sobre la carga probatoria en la hipótesis apuntada, para saber a quién corresponde dicha carga de la prueba sobre la objeción formulada, deben atenderse los hechos en que se funde la misma, aplicándose las reglas genéricas establecidas en los artículos 289 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 263 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, en cuanto a que **a cada parte corresponde probar los hechos de sus pretensiones. Por tanto, si la objeción de un documento privado proveniente de los interesados base de sus pretensiones se funda en la circunstancia de no haber suscrito el documento el objetante,**

²² Jurisprudencia 1a./J. 4/2005, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Página 266.

a él corresponde la carga de la prueba. Dicho de otra forma, quien invoca una situación jurídica está obligado a probar los hechos fundatorios en que aquélla descansa; por lo contrario, quien sólo quiere que las cosas se mantengan en el estado que existen en el momento en que se inicia el juicio, no tiene la carga de la prueba, pues desde el punto de vista racional y de la lógica es evidente que quien pretende innovar y cambiar una situación actual, debe soportar la carga de la prueba.

Énfasis añadido

Bajo ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió, en concordancia con los preceptos invocados en líneas que anteceden, que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que debe ser necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción, es decir, que al objetante corresponde la carga de la prueba.

A efecto de robustecer lo anterior, se citan criterios de diversos Tribunales Colegiados de Circuito, en los que se han pronunciado en tal sentido sobre el tema:

- ***DOCUMENTOS PRIVADOS. OBJECIÓN A LOS.***²³
- ***DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. CONFORME AL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA.***²⁴
- ***DOCUMENTOS PRIVADOS. PARA NEGARLES VALOR PROBATORIO, NO BASTA LA SIMPLE OBJECIÓN, SINO QUE DEBEN SEÑALARSE LAS CAUSAS EN QUE LA FUNDE Y DEMOSTRARLAS.***²⁵
- ***DOCUMENTOS PRIVADOS, CARGA DE LA PRUEBA EN CASO DE OBJECIÓN A LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)***²⁶

²³ Jurisprudencia I.30c. J/8, Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, Página 423.

²⁴ Tesis Aislada XV.4o.12 C, Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, Página 3128.

²⁵ Jurisprudencia III. 10c. J/17, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Número 63, Marzo de 1993, Página 46.

²⁶ Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Agosto de 1993, Página 422.

- **DOCUMENTOS PRIVADOS. CARGA DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR LA OBJECCIÓN RESPECTO DE LA AUTENTICIDAD DE LA FIMA CONTENIDA EN ELLOS**²⁷
- **DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)**²⁸

De igual forma, resulta aplicable la Jurisprudencia I.3o.C. J/11²⁹, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes:

DOCUMENTOS PRIVADOS INSUFICIENTEMENTE OBJETADOS POR EL PROPIO FIRMANTE, VALOR PROBATORIO DE LOS. *En tratándose de documentos privados, debe hacerse la distinción entre aquellos que provienen de terceras personas y los que se atribuyen a las partes litigantes en la controversia. Respecto de los primeros, basta la objeción del instrumento privado, debidamente razonada, para que pierda su valor probatorio, quedando a cargo del oferente la carga de la prueba y apoyar su contenido aportando otros elementos de convicción, y en relación con el segundo supuesto, para tener por satisfecho lo dispuesto por el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es menester que **la parte a quien perjudique realice en tiempo, forma y suficiencia la objeción, para que pierda su alcance probatorio dicho instrumento. De esta manera, se tiene que si en un caso la contraparte del oferente, al dársele vista con el documento exhibido, se limitó a manifestar que no lo había firmado, tal aseveración no pudo constituir la causa suficiente de objeción que demeritara el alcance de esa probanza, ya que para tal efecto resulta indispensable que existan causas motivadoras de la invalidez de la prueba y que se aportaran las pruebas idóneas para tal fin, como pudieron ser las periciales grafoscópicas, grafológicas y caligráficas; elementos que no se rindieron para acreditar la impugnación, como lo dispone el artículo 341 del código citado.***

Énfasis añadido

²⁷ Tesis XXXI.3º 8 L, Tercer Tribunal Colegiado de Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, Página 1254.

²⁸ Tesis II. o C, 495 C, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Página 1454.

²⁹ Tesis I.3o. C J/11, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de 1997, Página 615.

En igual sentido, el Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito en la Jurisprudencia III.1o.C. J/29³⁰, sostuvo el referido criterio en el siguiente sentido:

DOCUMENTOS PRIVADOS, PRUEBA DE LA FALSEDAD DE LA FIRMA DE LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Una interpretación armónica de los artículos 342, 343, 344, 345, 346 y 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, lleva a concluir que cuando se objeta la autenticidad de la firma de un documento privado es necesario pedir el cotejo de la misma con una señalada como indubitable; además, debe ofrecerse la prueba pericial respectiva, dado que la falsificación de la firma es un punto que sólo puede ser determinado por una persona con conocimientos especiales en la materia, es decir, por un perito grafógrafo, aun cuando exista diferencia notoria entre las firmas cuestionadas, porque tal circunstancia, por sí sola, no revela lo apócrifo de una de ellas, sino únicamente la diferencia entre ambas.

Énfasis añadido

Lo anterior, en suma, significa que para desvirtuar la presunción de inocencia que surge en favor del denunciado cuando aporta elementos de prueba idóneos para demostrar que la afiliación cuestionada estuvo precedida de la manifestación de voluntad del quejoso, tal como las constancias de afiliación correspondientes, o bien, elementos que pongan de manifiesto que el quejoso realizó hechos positivos derivados de su militancia, no basta que, de manera abstracta y genérica, el quejoso afirme que dichos medios de convicción no son veraces o auténticos.

Lo anterior, atento que, conforme a la normatividad que rige los procedimientos sancionadores electorales y que inexcusablemente está obligado a seguir este Consejo General, resulta imperativo que quien objeta un medio de prueba, señale específicamente cuál es la parte que cuestiona, y al efecto aporte, o cuando menos señale, conforme a la regla general relativa a que a quien afirma le corresponde probar —vigente en los procedimientos sancionadores electorales conforme a lo establecido por la Sala Superior—, los elementos objetivos y ciertos que puedan conducir a destruir la eficacia probatoria de los elementos aportados por el denunciado en su defensa, pues de otra manera, el principio de presunción de inocencia deberá prevalecer apoyado en las evidencias allegadas al procedimiento por el presunto responsable.

³⁰ Jurisprudencia III.1o.C. J/29, Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Página 680.

4. HECHOS ACREDITADOS Y PRECISIONES

En principio, es importante considerar que la responsabilidad administrativa atribuida al infractor de una norma electoral, debe estar sustentada en dos principios que constituyen la base objetiva de todo procedimiento sancionador: por un lado, la existencia fáctica de la conducta prevista como falta en la norma; y por otro, la responsabilidad del sujeto a quien se le atribuye dicha conducta, esto es, el nexo causal que debe quedar demostrado entre la realización de la conducta infractora y la responsabilidad en su comisión por el presunto infractor.

Así, a efecto de determinar la legalidad o ilegalidad de los hechos cuestionados y la responsabilidad atribuida al partido denunciado, se verificará en principio, la existencia de los mismos y las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se materializaron, a partir del acervo probatorio que obra en el sumario, mismo que se integra por los elementos siguientes:

- a) **Documental pública**, consistente en la impresión del correo electrónico de diez de julio de dos mil dieciocho, recibido de la cuenta institucional patricio.ballados@ine.mx, correspondiente al Director Ejecutivo de la DEPPP, mediante el cual se informó a la UTCE que el hoy quejoso se encontró afiliado al PVEM, así como la fecha en que ello aconteció.
- b) **Documental privada** consistente en original de la cédula de afiliación de Julio César Almanza Vega al PVEM, de la cual se advierte la afiliación cuestionada, así como la fecha en que esta se realizó.

En torno a los medios de convicción citados, la documental pública indicada en el inciso a), cuenta con valor probatorio pleno, por provenir de un funcionario electoral en el ejercicio de sus atribuciones, tal como lo prevén los artículos 462, párrafo 2, de la LGIPE; y 27, párrafo 2, del *Reglamento de Quejas*, mientras que la documental privada referida en el inciso b) sólo hará prueba plena cuando, al ser valorada por este Consejo General, y concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos a que se refieren, con base en lo establecido en los artículos 462, párrafo 3, de la LGIPE; y 27, párrafo 3, del *Reglamento de Quejas*.

Así las cosas, de los medios de prueba referidos se puede colegir los siguiente:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JCAV/JD08/MICH/204/2018

Quejoso	Información proporcionada por la DEPPP ³¹	Manifestaciones del Partido Político ³²
<p>El ciudadano quejoso denunció la presunta indebida afiliación, así como la utilización de datos personales sin consentimiento, atribuida al <i>PVEM</i>.</p> <p>El quejoso, aportó como prueba impresión de pantalla de la página de este Instituto, mediante la que se desprende que la fecha de afiliación corresponde a 15/11/2016.</p>	<p>Informó, que el denunciante está afiliado al <i>PVEM</i> con fecha de alta el <u>quince de noviembre de dos mil dieciséis</u>.</p>	<p>Informó que el ciudadano estuvo afiliado, pero se dio de baja, exhibió el original del acuerdo CEE/PVEM/004/2018, de 11 de julio de 2018, emitido por el Comité Ejecutivo Estatal de Michoacán, por el que se tuvo la baja a la afiliación del <i>PVEM</i> al denunciante.</p> <p>Asimismo, exhibió original del formato de afiliación de 15 de noviembre de 2016 y copia simple de la credencial para votar de esta persona.</p>
Observaciones		
<p>El partido político denunciado aportó original de la cedula de afiliación, en la que aparecen los datos del denunciante, los cuales tienen coincidencia con los datos que aparecen en la credencial para votar del quejoso, además de contener, aparentemente, su firma autógrafa.</p> <p>En uno de los apartados de la solicitud de afiliación exhibida por el denunciado, se advierte la fecha de afiliación del quejoso (15 NOV 16).</p>		
Conclusiones		
<p>Del análisis vertido respecto a la información y pruebas recabadas, se puede concluir lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Julio César Almanza Vega fue registrado como militante del <i>PVEM</i>; 2. La afiliación mencionada tuvo lugar el 15 de noviembre de 2016; 3. El <i>PVEM</i> aportó elementos a partir de los cuales esta autoridad concluye que la afiliación del quejoso a dicho partido se realizó conforme con las disposiciones legales y estatutarias aplicables. 		
<p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante fue militante del <i>PVEM</i> y que el partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria, original del formato de afiliación, y que el quejoso no objetó la autenticidad del documento base del denunciado, así como tampoco su alcance y valor probatorio, en términos de lo dispuesto en el artículo 24 del <i>Reglamento de Quejas</i>, se debe concluir que, la afiliación del ciudadano se realizó conforme con las disposiciones legales y estatutarias aplicables.</p>		

³¹ Enviada vía correo electrónico, visible a fojas 23 a 24.

³² Visible a fojas 31 a 34.

Lo anterior, toda vez que el quejoso en respuesta a la vista (con el formato de afiliación), refirió *que podría tratarse de una manipulación de mis datos, como ciudadano mexicano realizo tramites constantemente y eso puede prestarse a una utilización indebida de mis datos personales y de mi firma*, sin aportar elementos probatorios que sustentaran su dicho.

En este sentido, a partir del contenido de los medios de prueba antes citados, de su relación con los hechos afirmados por las partes y la verdad conocida, este Consejo General arriba a las siguientes conclusiones:

- Conforme a lo informado por la *DEPPP* y lo reconocido por el *PVEM*, el hoy quejoso, Julio César Almanza Vega, fue afiliado al citado partido político el quince de noviembre de dos mil dieciséis.
- Derivado que la incorporación al padrón de afiliados del hoy quejoso es un hecho reconocido por las partes, y constatado por la *DEPPP*, el tema a debate lo constituye la legalidad o ilegalidad de dicha afiliación, lo que habrá de determinarse dependiendo de la existencia del consentimiento de su titular o de la ausencia de este.

5. CASO CONCRETO

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por el quejoso, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; esto es, **partido político**, candidato o inclusive cualquier persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra, su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JCAV/JD08/MICH/204/2018

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

Ahora bien, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, la autoridad debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

Así, en consonancia con lo hasta aquí razonado, se tiene que la carga de la prueba respecto a que la afiliación materia de queja fue voluntaria, cuando en tal circunstancia se basa la defensa del partido político denunciado, corresponde a éste; mientras que la demostración de la objeción a la veracidad o autenticidad de dichas constancias corresponde al quejoso, pues de otra forma, deberá prevalecer la presunción de inocencia que asiste al partido político.

Así, en un primer momento, está demostrado, a partir de la información proporcionada por la *DEPPP*, así como de lo reconocido por el *PVEM* y de la constancia de afiliación aportada por el denunciado, que el quejoso fue afiliado al partido político en el tres de febrero de dos mil catorce, por lo que a continuación se debe dilucidar si dicha afiliación fue o no voluntaria, pues en este segundo caso, se actualizará la infracción denunciada y, en consecuencia, será procedente imponer una sanción entre las que establece el artículo 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIE*.

En este sentido, la carga de la prueba para demostrar que la afiliación respectiva fue el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual del hoy quejoso, corresponde al *PVEM*, y no al quejoso acreditar que no dio su consentimiento para ser afiliado a dicho partido, al tratarse de un hecho negativo que no es objeto de prueba. Lo anterior, visto que la defensa establecida por el partido político estriba en afirmar que sí cumplió las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación.

Así, al haberse demostrado la existencia de la afiliación del quejoso al partido denunciado, el hecho a dilucidar se reduce a determinar si dicha afiliación fue

consentida por el denunciante y por ende resulta legalmente valida, o si, por el contrario, tal afiliación adolece de manifestación de la voluntad libre, individual, pacífica y personal de Julio César Almanza Vega, y en consecuencia debe reputarse ilícita.

Así las cosas, para sostener la legalidad de la afiliación cuestionada el *PVEM* ofreció como medio de prueba original de la cédula de afiliación del hoy quejoso, medio de convicción que esta autoridad electoral, al valorarlos tanto en lo individual como en su conjunto con el caudal probatorio restante, estima suficientes, idóneos y pertinentes para acreditar la licitud de la afiliación controvertida.

No es obstáculo a lo anterior el hecho que se trata de una documental privada que *per se* no tiene una eficacia demostrativa plena, pues apreciada en su contexto y concatenada con el caudal probatorio que obra en autos, de conformidad con los principios de la lógica y la sana crítica, así como las máximas de la experiencia, permiten a esta autoridad electoral concluir la licitud de la afiliación discutida, ya que fue el resultado de la manifestación libre y voluntaria del hoy quejoso, la cual, como ya se dijo, quedó constatada con la firma autógrafa que plasmo en dicho formato.

De este modo, esta autoridad resolutora integró una cadena de indicios a partir de diversos hechos que en la especie se tuvieron como demostrados, en la especie: i) las manifestaciones de las partes y la *DEPPP* respecto a la existencia de la afiliación; ii) la documental privada de la solicitud de afiliación de Julio César Almanza Vega, en cuyo contenido aparece la manifestación de la voluntad del quejoso (firma autógrafa) y; iii) la falta de objeción eficaz de ese formato.

En efecto, por cuanto hace a Julio César Almanza Vega, es posible advertir de las constancias de autos que, mediante Acuerdo de veinticinco de julio del año en curso, se le dio vista con la finalidad que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el medio de prueba presentado por el *PVEM*.

Tal requerimiento fue conforme a lo siguiente:

TERCERO. VISTA DE ALEGATOS.

...

*Asimismo, con el fin de respetar el derecho humano al debido proceso previsto en los artículos 14, 16 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se considera idóneo, oportuno y apegado a derecho, **dar vista** con las constancias atinentes **(copia simple de la documentación aportada por el Partido Verde***

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JCAV/JD08/MICH/204/2018

Ecologista de México –cédula de afiliación-) al ciudadano **Julio César Almanza Vega** para que, al momento de presentar su escrito de alegatos, efectúe las manifestaciones que considere oportunas, las cuales deberán relacionarse con la materia del asunto que nos ocupa, a fin de contar con elementos suficientes sobre la presunta afiliación indebida que se aduce.

Al respecto, es importante hacer notar que las manifestaciones u objeciones que, en su caso, formule respecto de la información con la cual se le corre traslado, deberá sujetarse a las reglas establecidas en el artículo 24 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, el cual, para efectos ilustrativos se transcribe a continuación:

Artículo 24

De la objeción

- 1. Las partes podrán objetar las pruebas ofrecidas durante la sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores ordinario y especial, siempre y cuando se realice antes de la audiencia de desahogo.*
- 2. Para efectos de lo señalado en el párrafo que antecede, las partes podrán objetar la autenticidad de la prueba o bien su alcance y valor probatorio, debiendo indicar cuál es el aspecto que no se reconoce de la prueba o porque no puede ser valorado positivamente por la autoridad, esto es, el motivo por el que a su juicio no resulta idóneo para resolver un punto de hecho.*
- 3. Para desvirtuar la existencia o verosimilitud de los medios probatorios ofrecidos, no basta la simple objeción formal de dichas pruebas, sino que es necesario señalar las razones concretas en que se apoya la objeción y aportar elementos idóneos para acreditarlas, mismos que tenderán a invalidar la fuerza probatoria de la prueba objetada.”*

Queda a disposición de las partes el expediente citado al rubro para consulta, en el 08 Consejo Distrital de este Instituto en el Estado de Michoacán, así como en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, sita en Viaducto Tlalpan No. 100, edificio “C”, planta baja, Col. Arenal Tepepan, C.P. 14610, Delegación Tlalpan, en la Ciudad de México.

Al efecto, el denunciante en cita manifestó lo siguiente:

Por este conducto doy respuesta al asunto sobre mi afiliación indebida al Partido Verde Ecologista de México, y expreso que recibí una supuesta hoja de afiliación a dicho partido por lo que manifiesto mi total rechazo a la evidencia que presentan, ya que a la vista es un formato absolutamente informal que no prueba en ningún sentido mi afiliación, incluso intuyo que podría tratarse de una manipulación de mis datos, como ciudadano mexicano realizo tramites constantemente y eso puede prestarse a una utilización indebida de mis datos personales y de mi firma. En todos mis años no he

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JCAV/JD08/MICH/204/2018

compartido simpatía alguna con el partido político mencionado, una hoja simple, vuelvo a repetir, no comprueba que sea militante ni simpatizante de ese partido, a la vista parece un formato en donde claramente pueden llenar datos sin autorización de la persona, y por tal motivo solicito que se investigue en caso de ser necesario, la hoja de afiliación en donde presentan mis datos. Un solo documento con datos ilegibles no comprueba mi afiliación al partido.

Ahora bien, de las manifestaciones antes relatadas, se advierte la oposición por parte del quejoso al formato de afiliación, al referir que *podría tratarse de una manipulación de mis datos, como ciudadano mexicano realizo tramites constantemente y eso puede prestarse a una utilización indebida de mis datos personales y de mi firma y que un solo documento con datos ilegibles no comprueba mi afiliación al partido.*

Sin embargo, debe precisarse que tales argumentos se realizan de forma lisa y llana, es decir, no establece razones concretas en que, su caso, apoyen su oposición, ni tampoco aportó elementos de prueba para acreditar sus manifestaciones a efecto de restar fuerza probatoria de esa prueba, por lo que no cumplen con lo establecido en el artículo 24, párrafos 2 y 3, del *Reglamento de Quejas*.

En efecto, no basta para esta autoridad la simple objeción formal, sino que es necesario señalar las razones concretas en que se apoya la misma y aportar los elementos idóneos para acreditarlas. En ese sentido, si una de las partes se limita a objetar de manera genérica los medios de convicción ofrecidos por la contraparte, sin especificar las razones concretas para desvirtuar su valor, ni aporta elementos para acreditar su dicho, su objeción no es susceptible de restar valor a las pruebas objeto del cuestionamiento.

Por tanto, si el quejoso se limita en referir que *podría tratarse de una manipulación de mis datos, como ciudadano mexicano realizo tramites constantemente y eso puede prestarse a una utilización indebida de mis datos personales y de mi firma y que un solo documento con datos ilegibles no comprueba mi afiliación al partido*, debió especificar las razones concretas en que apoyaba su argumento, así como aportar los elementos probatorios idóneos para tratar de acreditar su dicho; además debió especificar los motivos precisos que consideraba al caso, lo anterior, con la finalidad de desvirtuar el valor del documento aportado, sin embargo, esto no ocurrió, y en consecuencia su objeción no es susceptible de ser atendida por esta autoridad.

Consecuentemente, si el denunciante se circunscribió a oponerse de manera genérica al medio de convicción ofrecido por el PVEM, al referir que podría tratarse de una manipulación de sus datos y firma, lo cierto es que no especificó las razones concretas para llegar a tal conclusión, ni mucho menos aportó elementos para acreditar su dicho, por lo que su objeción no es apta de restar valor a la prueba objeto del cuestionamiento.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 12/2012 (10a.) de rubro y contenido siguientes:³³

OBJECCIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE TERCEROS. LA NECESIDAD DE EXPRESAR EL O LOS MOTIVOS EN QUE SE SUSTENTA, DEPENDERÁ DE LA PRETENSIÓN DE QUIEN OBJETA (CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). *Tratándose de la objeción de documentos provenientes de terceros, el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no exige determinada formalidad para formular la oposición respectiva; sin embargo, se considera que, -atendiendo a la naturaleza de la prueba-, si lo que se pretende con la sola objeción de un documento privado proveniente de un tercero, es que no se produzca la presunción del reconocimiento tácito del documento por no haberlo objetado, bastará con que exprese su objeción de manera genérica a fin de que el juzgador tome en consideración este dato al momento de valorar la prueba, -ello con independencia del valor probatorio que se le otorgue, derivado del hecho de que se perfeccione o no la documental-. En cambio, si lo que se pretende con la objeción es controvertir, -entre otras causas-, la autenticidad de la firma o del contenido del documento, se estima que sí constituye un presupuesto necesario para tener por hecha la objeción, que se expresen las razones conducentes, dado que la objeción no es una cuestión de capricho, sino que se compone precisamente de los argumentos o motivos por los que el interesado se opone al documento respectivo. Dichas razones permiten que la parte oferente tenga la oportunidad de saber en qué sentido tiene que perfeccionar su documento, más aún cuando proviene de un tercero, ya que de lo contrario, el cumplimiento de esa carga procesal estará al arbitrio de quien simplemente objeta un documento sin exponer ninguna razón. Además, tal información también resulta importante para que el juzgador, teniendo esos elementos, le otorgue el valor y alcance probatorio en su justa dimensión.*

En tal virtud, si bien es cierto Julio César Almanza Vega, objetó el documento base aportado por el denunciado, lo cierto es que no ofreció y mucho menos aportó a la controversia elemento de convicción alguno que soportara su dicho, de manera que debe concluirse que faltó a la carga de la prueba, al abstenerse de aportar pruebas que soportaran su dicho, de modo que la sola objeción del documento bajo análisis, basada en la afirmación no demostrada de que podría tratarse de una manipulación

³³ Consultable en la liga electrónica
<http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2000608&Clase=DetalleTesisBL&Semana=0>

de sus datos y firma, es insuficiente para derrotar la presunción de inocencia que surge de la documental en cuestión.

6. CONCLUSIÓN

A partir de los razonamientos establecidos en el apartado previo, esta autoridad considera no resultó fragmentada por las manifestaciones del referido quejoso, ya que la carga probatoria derivada de su afirmación no fue soportada en medio de prueba alguno.

Bajo esta óptica, resulta claro que si el quejoso sostuvo que podría tratarse de una manipulación de sus datos y firma, y que el formato de afiliación presentado por el *PVEM* no comprueba su afiliación a dicho partido, asumió una carga probatoria para demostrar ese aserto, no sólo por la carga genérica que asumen las partes de probar cualquier afirmación que realicen, sino porque la manipulación y/o falsificación de un hecho jurídico, lato sensu, (en el caso de los datos y la firma cuestionada) resulta un evento extraordinario que debe justificarse por quien lo afirma, ya que implica un estado de cosas anormal que genera una duda razonable sobre su realización, máxime, si se consideran las inferencias a las que arribó esta autoridad electoral a partir de la cadena de indicios y del material probatorio que obra en autos.

En consecuencia, si el quejoso no satisface esa carga al no ofrecer medio de prueba alguno, entonces, resulta dable tener por cierta la firma cuestionada y consecuentemente como lícita la afiliación del que el quejoso se duele. En conclusión, a partir de los razonamientos establecidos en el apartado previo, esta autoridad considera que la afiliación de Julio César Almanza Vega, al *PVEM* fue apegada a derecho, ya que, de lo expuesto puede afirmarse que la conducta realizada por el justiciable resulta atípica en relación con los injustos descritos en la normatividad electoral que le fueron imputados.

Ahora bien, con independencia de lo anterior, esta autoridad estima que con base en el marco normativo señalado, las firmas en las cédulas de afiliación que proporcionen los partidos políticos, son un elemento indispensable para acreditar la voluntad de los ciudadanos para expresar su consentimiento para ser afiliados, más allá si los recuadros de las cédulas de afiliación no son llenados o son mal llenados, pues con la firma se ve reflejada la conformidad con el documento en el que se estampa, salvo que exista alguna prueba en contrario.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/JCAV/JD08/MICH/204/2018

De tal manera, debe concluirse que dicho denunciante faltó a la carga de la prueba, absteniéndose de aportar pruebas que soportaran su dicho, de modo que la sola objeción del documento bajo análisis, basada en la afirmación no demostrada de que podría tratarse de una manipulación de sus datos personales y de su firma, es insuficiente para derrotar la presunción de inocencia que surge de la documental en cuestión.

Lo anterior es así, porque como fue antes razonado, la actualización del tipo administrativo en estudio tiene como elementos constitutivos: i) una incorporación al partido político que se traduce en el acto de afiliación formal y, ii) la falta de consentimiento libre del ciudadano para ser afiliado.

En este sentido para colmar la hipótesis normativa contenida en el artículo 3, párrafo 2 de la Ley de Partidos en relación con los diversos 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) del mismo ordenamiento legal y 443, párrafo 1, incisos a) y n) de la *LGIFE*, cuya infracción se imputó al denunciado, resultaba necesario que concurriera la acreditación de los dos elementos referidos, lo que no sucedió en el particular.

Es decir, en el caso debió demostrarse fehacientemente no solamente la afiliación del quejoso al *PVEM*, sino también la ausencia de voluntad del mismo para ser afiliado, en razón de que el núcleo del tipo administrativo en estudio lo constituye la libertad de asociación, de ahí que, si en la especie solamente se justificó la afiliación del quejoso sin evidenciar la ausencia de voluntad del mismo en ese acto, entonces, es inconcuso que no se colmó el tipo administrativo sujeto a escrutinio.

De igual manera, por las razones expuestas con antelación, tampoco se actualizó la hipótesis descrita en el numeral 29 de la *Ley de Partidos*, ya que al concluirse que el hoy quejoso se afilió libremente al partido justiciable, por mayoría de razón debe afirmarse que el *PVEM* no utilizó indebidamente la información y datos personales del impetrante, porque este, en su oportunidad, consintió afiliarse al partido político, para lo cual, conforme al marco normativo descrito en la presente Resolución, era menester proporcionar al *PVEM* esa información y documentos.

En suma, al no acreditarse uno de los extremos en que se finca el procedimiento sancionador, específicamente la falta de voluntad de afiliarse al partido denunciado, se concluye la inexistencia del tipo administrativo, por lo que no procede imponer al *PVEM* sanción alguna.

En suma, ante lo razonado en líneas precedentes, se debe concluir que el bien jurídico tutelado por las normas constitucionales y legales que protegen la libertad

del ciudadano para afiliarse voluntariamente a un partido político, no fue transgredido por el *PVEM* y, consecuentemente, el presente procedimiento sancionador debe considerarse **INFUNDADO**.

Similar consideración estableció el *Consejo General* del *INE*, en la determinación INE/CG1168/2018, dictada el seis de agosto de dos mil dieciocho, al resolver el procedimiento sancionador ordinario identificado con la clave UT/SCG/Q/APS/CG/23/2017.

TERCERO. DESAFILIACIÓN DEL QUEJOSO

En ese sentido, con independencia de que, en el fondo se ha declarado **infundado** el procedimiento, lo cierto es que resulta indudable que la intención de dicho denunciante es **no** continuar como afiliado al partido político denunciado, por lo que se debe ordenar a *PVEM* para que, en el supuesto que el quejoso continúe en su padrón de afiliados, **sin mayor trámite**, cancele el registro del mismo como su militante, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentó su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la *UTCE*, las pruebas que amparen el cumplimiento.

Cabe precisar que la anterior conclusión, es congruente con lo resuelto por la Sala Superior en el juicio ciudadano SUP-JDC-2/2017, de cinco de enero de dos mil diecisiete, en donde concluyó en la necesidad de comunicar la intención de un ciudadano de no pertenecer a las filas de un determinado partido político, a la *DEPPP*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, procediera a dar de baja al ciudadano en el padrón de militantes así como de cualquier otra base de datos con que cuente el *INE*, que lo vincule con un instituto político en particular.

CUARTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN.

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la Constitución Federal,^[1] se precisa que la presente determinación es

^[1] Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª), Página: 2864, Rubro: “**TUTELA**”

impugnable a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previsto en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se declara **infundado** el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra del **Partido Verde Ecologista de México** al no infringir las disposiciones electorales de libre afiliación respecto del ciudadano Julio César Almanza Vega, en términos del Considerando SEGUNDO de esta Resolución.

SEGUNDO. Con independencia que en el fondo se ha declarado **infundado** el presente procedimiento, se ordena al **Partido Verde Ecologista de México** para que, de ser el caso que el quejoso -Julio César Almanza Vega- continúe en su padrón de afiliados, **sin mayor trámite**, cancele su registro como su militante, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente Resolución** con efectos, a partir de la fecha en que presentó su escrito de denuncia y, hecho lo anterior, de inmediato lo informe a la *DEPPP* del *INE*, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia, debiendo remitir a la *UTCE* las pruebas que amparen el cumplimiento, a fin de vigilar y corroborar el cumplimiento por parte del referido ente político, conforme a lo dispuesto en su Considerando TERCERO.

TERCERO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de apelación, así como por juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previsto en los numerales 42 y 79, respectivamente, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Notifíquese al ciudadano **Julio César Almanza Vega** y al **Partido Verde Ecologista de México**, por conducto de su respectivo representante ante este Consejo General; y por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo._____

Le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día._____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se determina la asignación de tiempos en Radio y Televisión a las Autoridades Electorales Locales para el cuarto trimestre de dos mil dieciocho, correspondiente al periodo ordinario federal, mediante la aplicación de criterios específicos de distribución._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias Secretario del Consejo, señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo._____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños._____

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente._____

Es una reflexión muy rápida sobre este punto._____

Es una norma o una regla que venimos aplicando ordinariamente para poder atender el mandato del Reglamento de asignar trimestralmente los tiempos en Radio y Televisión a las diversas autoridades electorales, particularmente las de carácter Local, y ocurre que el Reglamento lo que nos dice es que una vez que concluye el periodo electoral, esto ocurrió a partir del día 2 de julio, obviamente nosotros entramos a la administración solo del 12 por ciento de los tiempos oficiales en Radio y Televisión y, en consecuencia, trimestralmente tenemos que hacer la asignación de los tiempos a las autoridades electorales que solicitan esos tiempos de manera previa._____

El detalle consiste simple y llanamente en que las autoridades electorales que tienen necesidad de disponer de los tiempos oficiales en la Radio y la Televisión por mandato del artículo 11, en el numeral 2 del propio Reglamento de Radio y Televisión, deben hacer una solicitud ante el Instituto para que se les asignen esos tiempos, pero tienen

que presentar la solicitud 30 días antes del inicio del periodo correspondiente, es decir, un mes antes del inicio del trimestre._____

Hasta ahí no tenemos ninguna complicación, y obviamente una vez que estas solicitudes estén presentadas, procedemos a hacer una asignación en automático de estos tiempos._____

¿Qué estamos haciendo con este Proyecto de Acuerdo? No estamos haciendo una asignación de tiempos, estamos haciendo una reserva de bolsa de tiempos para que las autoridades electorales pudieran, en su caso, usar esos tiempos, ¿qué quiere decir?, que no tenemos las solicitudes específicas, ese es el punto que creo que no es correcto, porque en rigor nosotros no deberíamos listar como aparece en los considerandos el universo de las autoridades electorales que nos han eventualmente pedido en otros momentos asignación de tiempos en radio y televisión y que por consecuencia eventualmente podrían acceder a estas bolsas._____

No están esas solicitudes precisadas en el Proyecto de Acuerdo y lo que estamos haciendo es no asignar los tiempos específicos, sino que estamos haciendo una reserva de bolsa de tiempo donde eventualmente entrarían estas autoridades._____

Creo que, esa parte no es una aplicación estricta del Reglamento de Radio y Televisión, creo que por razones prácticas se procedería a acompañar el Acuerdo, pero sí me parece que estamos en una situación que no es necesariamente de aplicación estricta del Reglamento de Radio y Televisión._____

Es todo Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños._____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif._____

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, Consejero Presidente._____

Ciertamente esta es la forma en que hemos venido procediendo en el caso de los tiempos para las autoridades locales._____

Se abre el espacio dentro de los tiempos de autoridades y se informa a las autoridades locales para que ellos puedan remitir sus órdenes de transmisión para llenar los espacios que les corresponden en las emisoras que cubren sus entidades, en caso de no hacerlo, esos tiempos se utilizan para la pauta del Instituto Nacional Electoral. Esa es la forma en que se ha puesto en práctica siempre este aspecto relacionado con los tiempos de las autoridades, tanto federales, como locales, entiendo la objeción del Consejero Electoral Marco Antonio Baños, habrá que tomarla en cuenta para en su momento revisar el Reglamento de Radio y Televisión o buscar una forma de operar diferente si es necesario, pero creo que en este momento continuemos con el esquema que ha funcionado hasta ahora, que ha operado razonablemente con el compromiso de revisarlo si es necesario hacia adelante, Consejero Presidente, muchas gracias._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif._____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños._____

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente._____

Es que el tema se arregla de una forma muy sencilla, el Reglamento de Radio y Televisión, no deja margen a dudas en el numeral 2 del artículo 11, dice expresamente que las autoridades electorales 30 días antes del inicio del trimestre correspondiente deben presentar la solicitud de asignación de tiempos, hasta ahí no hay vuelta de hoja, leído de otra manera, si no te lo presentan en ese plazo ya no tendrías por qué reservar ni asignar esos tiempos, así de fácil._____

Entonces, si de lo que se trata es de tener un criterio que garantice el acceso de las autoridades electorales a los tiempos en Radio y Televisión, con lo cual yo no tendría problema, quitemos ese artículo y digamos que se reservan las bolsas, o sea, modifiquen el procedimiento o simplemente apeguémonos al procedimiento en términos del Reglamento, si nos apegamos al Reglamento nosotros tendríamos que tener desde este momento la asignación de los espacios en Radio y Televisión para las diversas

autoridades, ¿qué estamos hacendó ahora? Solo en un considerando enlistar todas las autoridades que eventualmente podrían tener acceso a esas bolsas de tiempo pero ahora no tenemos las solicitudes específicas y por tanto no estamos haciendo la asignación que dice el Reglamento. Ese es el punto._____

Entonces, convoco amistosamente que en el marco de esta invitación que hizo el Presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, a revisar el Reglamento, revisemos ese procedimiento porque si no, no está siendo práctico para efectos de que las autoridades ingresen a esos espacios, ese no es el procedimiento que debemos mantener ahí._____

Es todo._____

Gracias, Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños._____

Al no haber más intervenciones Secretario del Consejo, tome la votación respecto del Proyecto de Acuerdo que nos ocupa._____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en el orden del día como el punto número 2._____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo._____

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente._____

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG1259/2018) Pto. 2_____

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE DETERMINA LA ASIGNACIÓN DE TIEMPOS EN RADIO Y TELEVISIÓN A LAS AUTORIDADES ELECTORALES LOCALES PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL DIECIOCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ORDINARIO FEDERAL, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE CRITERIOS ESPECÍFICOS DE DISTRIBUCIÓN

ANTECEDENTES

- I. **Catálogo Nacional de Emisoras 2018.** El veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, en la décima sesión ordinaria del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el *“Acuerdo [...] por el que se declara la vigencia del marco geográfico electoral relativo a los mapas de cobertura, se aprueba el Catálogo Nacional de estaciones de radio y canales de televisión que participarán en la cobertura del Proceso Electoral Federal 2017-2018, de los Procesos Electorales Locales coincidentes y el periodo ordinario durante dos mil dieciocho, para dar cumplimiento al artículo 173, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y se actualiza el Catálogo de concesionarios autorizados para transmitir en idiomas distintos al nacional y de aquellos que transmiten en lenguas indígenas que notifiquen el aviso de traducción a dichas lenguas”*, identificado como INE/ACRT/23/2017.
- II. **Publicación del catálogo nacional de emisoras.** El treinta de octubre de dos mil diecisiete, en sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el *“Acuerdo [...] por el que se ordena la publicación del catálogo de estaciones de radio y canales de televisión que participarán en la cobertura del Proceso Electoral Federal 2017-2018, de los Procesos Electorales Locales coincidentes y el periodo ordinario durante dos mil dieciocho”*, identificado como INE/CG488/2017.
- III. **Asignación de tiempos en radio y televisión a las autoridades electorales locales, tercer trimestre de dos mil dieciocho.** El veinte de junio de dos mil dieciocho, en sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el *“Acuerdo [...] por el que se determina la asignación de tiempos en radio y televisión a las autoridades electorales locales para el tercer*

trimestre de dos mil dieciocho, correspondiente al periodo ordinario federal, mediante la aplicación de criterios específicos de distribución”, identificado como INE/CG524/2018.

CONSIDERACIONES

Competencia en materia de administración de los tiempos de radio y televisión

1. El Instituto Nacional Electoral es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y a los de otras autoridades electorales y al ejercicio del derecho de los partidos políticos y candidatos, siendo independiente en sus decisiones y funcionamiento, de conformidad con los artículos 41, Base III, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30, numeral 1, inciso h); 160, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 4, numeral 1 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral.

Competencia específica del Consejo General del Instituto Nacional Electoral

2. Los artículos 162 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 4, numeral 2 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral disponen que el Instituto ejercerá sus facultades en materia de radio y televisión a través del Consejo General; de la Junta General Ejecutiva; de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos; del Comité de Radio y Televisión; de la Comisión de Quejas y Denuncias; así como de los Vocales Ejecutivos y juntas ejecutivas de los órganos desconcentrados, locales y distritales.
3. El artículo 35, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que el Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto Nacional Electoral y es el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral.
4. Es competencia del Consejo General aprobar el presente Acuerdo, en términos de lo dispuesto por los artículos 44, numeral 1, inciso jj) en relación con el inciso n) del mismo; 162, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 4, numeral 2, inciso a); 6, numeral

1, incisos e) e i); y 11, numeral 1 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral.

Tiempos correspondientes a las autoridades electorales de conformidad con la normativa aplicable

5. Los artículos 182, numeral 1, incisos a) y b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 11, numerales 1, 3 y 4 del Reglamento de la materia, disponen que el Instituto, por conducto de este Consejo General, determinará la asignación, mediante la aplicación de criterios específicos de distribución, del tiempo en radio y televisión destinado a sus propios fines y de otras autoridades electorales en forma trimestral, en ningún caso serán incluidas como parte de lo anterior las prerrogativas para los partidos políticos. Para tales efectos, los mensajes de las autoridades electorales podrán tener duración de veinte o treinta segundos.

6. Los artículos 41, Base III, Apartado A, inciso g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 181 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 8, numerales 1 y 2 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral; señalan que el Instituto tendrá a su disposición fuera de los periodos de precampaña y campaña electoral hasta el doce por ciento **(12%)** del tiempo total que el Estado disponga en radio y televisión, lo cual se traduce en el total semanal siguiente:

TIPO DE EMISORA	TIEMPO TOTAL A DISTRIBUIR POR EL INSTITUTO	
	RADIO	TELEVISIÓN
Concesionarias	54 minutos 36 segundos	40 minutos 15 segundos
Concesionarias de uso público y social	25 minutos 12 segundos	

7. Dicho lo anterior, del total del tiempo asignado al Instituto durante el periodo ordinario, se distribuirá entre los Partidos Políticos Nacionales y locales en forma igualitaria el cincuenta por ciento **(50%)**, y el cincuenta por ciento **(50%)** restante, se distribuirá entre el Instituto y las demás autoridades electorales, lo que se traduce en el total semanal siguiente:

TIPO DE EMISORA	TIEMPO A DISTRIBUIR POR EL INSTITUTO A LAS AUTORIDADES ELECTORALES	
	RADIO	TELEVISIÓN
Concesionarias	27 minutos 18 segundos	20 minutos 7.5 segundos

Concesionarias de uso público y social	12 minutos 36 segundos
--	------------------------

8. De conformidad con el artículo 11, numeral 1 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, se determina la asignación de tiempos en radio y televisión para las autoridades electorales, con base en el criterio específico de distribución semanal siguiente:

En aquellas entidades en que no se celebrarán elecciones locales, a las autoridades electorales locales que hayan presentado oportunamente su solicitud de tiempos en radio y televisión, se les asignará aproximadamente un veinticinco por ciento **(25%)** del tiempo disponible, el cual se distribuirá en partes iguales, y aproximadamente el setenta y cinco por ciento **(75%)** restante al Instituto Nacional Electoral para el cumplimiento de sus fines.

Siendo así, el tiempo a asignar entre las autoridades en los estados donde no se celebre un Proceso Electoral Local, durante el periodo ordinario es el siguiente:

TIPO DE EMISORA	AUTORIDADES ELECTORALES LOCALES		INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	
	25%		75%	
	RADIO	TELEVISIÓN	RADIO	TELEVISIÓN
Concesionarias	6 minutos 49 segundos	5 minutos 1.8 segundos	20 minutos 29 segundos	15 minutos 5.6 segundos
Concesionarias de uso público y social	3 minutos 9 segundos		9 minutos 27 segundos	

9. De conformidad con lo establecido por los artículos 161; 164, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 11, numerales 2, 3 y 4 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, las autoridades electorales deben presentar a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos las solicitudes de tiempo en radio y televisión que requieran para el cumplimiento de sus fines, con treinta días de anticipación al inicio del trimestre correspondiente y en la medida de lo posible, deberán acompañar a su solicitud los materiales respectivos.

En ese sentido, las autoridades electorales locales, tanto administrativas como jurisdiccionales, contempladas para la asignación de tiempo en radio y televisión concerniente al cuarto trimestre del periodo ordinario de dos mil dieciocho, siempre que presenten la respectiva solicitud en tiempo y forma, son las siguientes:

ENTIDAD	AUTORIDAD ELECTORAL
Aguascalientes	Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes
	Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes
Baja California	Instituto Estatal Electoral de Baja California
	Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California
Baja California Sur	Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur
	Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur
Campeche	Instituto Electoral del Estado de Campeche
	Tribunal Electoral del Estado de Campeche
Chiapas	Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
	Tribunal Electoral del Estado de Chiapas
	Fiscalía de Delitos Electorales
Chihuahua	Instituto Estatal Electoral de Chihuahua
	Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua
Ciudad de México	Instituto Electoral Ciudad de México
	Tribunal Electoral de la Ciudad de México
Coahuila	Instituto Electoral de Coahuila
	Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza
	Subprocuraduría Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Coahuila
Colima	Instituto Electoral del Estado de Colima
	Tribunal Electoral del Estado de Colima
Durango	Instituto Electoral y de Participación Ciudadana Durango
	Tribunal Electoral del Estado de Durango
Guanajuato	Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
	Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato

ENTIDAD	AUTORIDAD ELECTORAL
Guerrero	Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero
	Tribunal Electoral del Estado de Guerrero
	Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Guerrero
Hidalgo	Instituto Estatal Electoral de Hidalgo
	Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo
	Subprocuraduría de Asuntos Electorales
Jalisco	Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
	Tribunal Electoral del Estado de Jalisco
México	Instituto Electoral del Estado de México
	Tribunal Electoral del Estado de México
	Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales
Michoacán	Instituto Electoral de Michoacán
	Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
Morelos	Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
	Tribunal Electoral del Estado de Morelos
	Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para el Estado de Morelos
Nayarit	Instituto Estatal Electoral de Nayarit
	Tribunal Estatal Electoral de Nayarit
Nuevo León	Comisión Estatal Electoral de Nuevo León
	Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
	Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León
Oaxaca	Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca
	Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca
Puebla	Instituto Electoral del Estado
	Tribunal Electoral del Estado de Puebla

ENTIDAD	AUTORIDAD ELECTORAL
Querétaro	Instituto Electoral del Estado de Querétaro
	Tribunal Electoral del Estado de Querétaro
Quintana Roo	Instituto Electoral de Quintana Roo
	Tribunal Electoral de Quintana Roo
San Luis Potosí	Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí
	Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí
	Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales del estado de San Luis Potosí
Sinaloa	Instituto Electoral del Estado de Sinaloa
	Tribunal Electoral de Sinaloa
Sonora	Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
	Tribunal Estatal Electoral de Sonora
	Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de Sonora
Tabasco	Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
	Tribunal Electoral de Tabasco
Tamaulipas	Instituto Electoral de Tamaulipas
	Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas
Tlaxcala	Instituto Tlaxcalteca de Elecciones
	Tribunal Electoral de Tlaxcala
Veracruz	Organismo Público Local Electoral de Veracruz
	Tribunal Electoral de Veracruz
Yucatán	Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán
	Tribunal Electoral del Estado de Yucatán
Zacatecas	Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
	Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas

10. En virtud de que el tiempo total correspondiente a las autoridades electorales y al Instituto Nacional Electoral se utilizará con la transmisión de mensajes de

treinta segundos, la adecuación no puede ser exacta, por lo que una vez que se haya determinado el total de spots correspondientes, en caso de que existan fracciones restantes y estas puedan ser optimizadas, serán asignadas al Instituto Nacional Electoral.

11. Para aquellas autoridades electorales de las entidades federativas en las que durante el trimestre en que se asignan tiempos en radio y televisión, se celebren Procesos Electivos Especiales, tales como referéndums, elección de comités ciudadanos y otros que impliquen la participación directa de la ciudadanía, la distribución de tiempos se hará de conformidad con lo siguiente:

- a) Del tiempo disponible en radio y televisión correspondiente al periodo ordinario, cuarenta por ciento **(40%)** se asignará al Instituto Nacional Electoral; cuarenta por ciento **(40%)** al Organismo Público Local Electoral; y el veinte por ciento **(20%)** restante se dividirá, en partes iguales, entre el resto de las demás autoridades electorales locales que hayan presentado la solicitud correspondiente al trimestre que se trate.

Siendo así, el tiempo a asignar entre las autoridades en los estados donde se celebre un Proceso Electivo Especial, durante el periodo ordinario es el siguiente:

TIPO DE EMISORA	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL		ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL		AUTORIDADES ELECTORALES LOCALES	
	40%		40%		20%	
	RADIO	TELEVISIÓN	RADIO	TELEVISIÓN	RADIO	TELEVISIÓN
Concesionarias	10 minutos 55.2 segundos	8 minutos	10 minutos 55.2 segundos	8 minutos	5 minutos 27.6 segundos	4 minutos
Concesionarias de uso público y social	5 minutos 2.4 segundos		5 minutos 2.4 segundos		2 minutos 24 segundos	

- b) Dicha asignación será aplicable únicamente durante los treinta días previos a aquél en que se celebre la jornada del Proceso Electivo Especial de que se trate; y

- c) Los Organismos Públicos Locales Electorales de las entidades federativas en las que se celebre un Proceso Electivo Especial deberán dar aviso de este y presentar su solicitud de tiempo para el mismo, a más tardar sesenta días previos a aquel en que se celebra la jornada correspondiente.
12. Atendiendo lo dispuesto en los artículos 11, numeral 3; y 43, numerales 12 y 13 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, en el caso de las autoridades electorales locales que habiendo solicitado tiempos en radio y televisión no remitan el material correspondiente, de conformidad con los calendarios y órdenes de transmisión que determine la Junta General Ejecutiva, dicho tiempo quedará a disposición del Instituto Nacional Electoral.

Fundamentos para la emisión del Acuerdo

<i>Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos</i>
Artículo 41, Base III, apartado A, inciso g).
<i>Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales</i>
Artículos 30, numeral 1 inciso h); 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj) en relación con el inciso n); 160, numeral 1; 161; 162; 164, numeral 1; 181 y 182, numeral 1, incisos a) y b).
<i>Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral</i>
Artículos 4, numerales 1 y 2; 6, numeral 1, incisos e) e i); 8, numerales 1 y 2; 11, numerales 1, 2, 3 y 4; y 43, numerales 12 y 13.

En razón de los antecedentes, considerandos y fundamentos señalados, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. Se determina la asignación de tiempo en radio y televisión para las autoridades electorales locales durante el cuarto trimestre del año dos mil dieciocho, correspondiente al periodo ordinario, de conformidad con los siguientes criterios específicos:

- a) A las autoridades electorales locales en las entidades en las que no se celebren elecciones locales, que hayan presentado oportunamente su solicitud de tiempos en radio y televisión, se les asignará un veinticinco por ciento **(25%)** del tiempo disponible, el cual se distribuirá en partes iguales, y aproximadamente el setenta y cinco por ciento **(75%)** restante al Instituto Nacional Electoral para el cumplimiento de sus fines.
- b) A las autoridades electorales de las entidades federativas en las que durante el cuarto trimestre del año dos mil dieciocho se celebren Procesos Electivos Especiales y que presenten oportunamente su solicitud se les asignará: cuarenta por ciento **(40%)** al Instituto Nacional Electoral; cuarenta por ciento **(40%)** al Organismo Público Local Electoral; y el veinte por ciento **(20%)** restante se dividirá en partes iguales, entre el resto de las demás autoridades electorales locales.

Dicha asignación será aplicable únicamente durante los treinta días previos a aquél en que se celebre la jornada del Proceso Electivo Especial de que se trate.

Los Organismos Públicos Locales Electorales de las entidades en que se celebre un Proceso Electivo Especial deberán dar aviso de éste y presentar su solicitud de tiempo para el mismo, a más tardar sesenta días previos a que se celebre la jornada correspondiente.

SEGUNDO. En caso de que las autoridades electorales no hayan realizado la solicitud correspondiente, el tiempo que les corresponda será utilizado por el Instituto Nacional Electoral.

TERCERO. El presente Acuerdo resultará aplicable durante el periodo comprendido entre el primero de octubre y el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. Asimismo, será aplicable en las entidades federativas con Proceso Electoral 2018-2019, en tanto no inicie la respectiva etapa de precampaña.

CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos con auxilio de las Juntas Locales Ejecutivas correspondientes, notifique el presente Acuerdo a cada una de las autoridades electorales locales.

QUINTO. El presente Acuerdo surtirá sus efectos una vez aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo._____

Dé cuenta del siguiente punto._____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, es el relativo a la Presentación de los Informes Anuales y de Gestión que las Comisiones rinden al Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre el desarrollo de sus actividades durante el año 2018._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo._____

Señoras y señores Consejeros y representantes están a su consideración los Informes mencionados._____

Tiene la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños._____

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente._____

Pediría una intervención para el primero de los puntos de estos Informes._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias Consejero Electoral Marco Antonio Baños._____

Como una moción, tal como está ordenado no tendríamos, al menos que el Consejo General decidiera otra cosa, reglamentariamente es una ronda de intervención para todos los informes tal como está porque estamos hablando de apartados._____

Consejero Electoral Marco Antonio Baños._____

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Consejero Presidente en esta ocasión no coincido con su criterio de interpretación, porque hicimos un apartado de informes pero cada uno de los apartados, cada uno de los informes tiene un sub apartado en este punto, entonces creo que si alguien desea intervenir en alguno de los puntos en específico lo podría hacer, como lo hacemos con las quejas en la inteligencia de que siendo Informe solamente pues se puede hacer una sola intervención por cada uno de los miembros del Consejo General._____

Creo que, es un tema bastante sencillo que no amerita más discusión procedimental, en mi respetuosa opinión Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Sin ningún problema, a diferencia con las quejas que ahí como bien señala se vota, pero no tengo ningún problema porque en todo caso, aquí tendríamos simple y sencillamente que dar por recibidos los informes sobre los que no hay ninguna intervención._____

Pero, procedamos, no tengo ningún inconveniente en una lectura flexible del Reglamento para atender las peticiones._____

Sí, Consejero Electoral Marco Antonio Baños una moción de orden._____

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Nada más le quitaría lo de flexible Consejero Presidente y ya con eso estamos de acuerdo porque no es un asunto de concesión gratuita, es un asunto simplemente de interpretación reglamentaria y vuelvo a insistir, la diferencia con las quejas sí es que se votan allá y se pueden discutir 3 rondas, aquí es solo una ronda y son para conocimiento del Consejo General y quien quiera hablar sobre los informes resalta los puntos que considera adecuados._____

En lo demás, estamos de acuerdo, Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Hasta en esto Consejero Electoral Marco Antonio Baños, la flexibilidad de la Presidencia, también abarca este punto._____

El señor representante del Partido del Trabajo desea hacer una moción. _____

El C. representante del Partido del Trabajo, Maestro Pedro Vázquez González: Gracias, primero señalar que según el Reglamento están prohibidos los diálogos._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Bueno, son mociones._____

El C. representante del Partido del Trabajo, Maestro Pedro Vázquez González: Correcto, entonces deseo hacer una intervención en el apartado 3.4._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Con mucho gusto._
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Ravel._____

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Para intervenir en el apartado 3.8, por favor. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: No creo que necesitemos hacer una ronda en lo general, así que no la someto siquiera a consideración. _____

Pasemos directamente al análisis del Informe en el orden del día con el número de apartado 3.1, tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. __

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. _____

Voy hacer uso de la palabra en ejercicio de lo que establece el Reglamento, y no por una concesión de flexibilidad en la conducción de la sesión, también con mucho respeto Consejero Presidente. _____

Este es el Informe que está presentando la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, que por mandato de Ley y del propio Reglamento se instaló para efectos del desahogo del Proceso Electoral, y si me parece por la relevancia que la Comisión ha tenido durante el desahogo del Proceso Electoral necesario que se pudieran resaltar algunos datos del Informe que aquí se da cuenta. __
Debo decir que este Informe ha sido revisado por los integrantes, y votado también por los integrantes de la propia Comisión, y en particular, quiero agradecer la participación del Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, que integró la Comisión, el Consejero Electoral Jaime Rivera Velázquez que también integró la Comisión, el Consejero Electoral Benito Nacif y la Consejera Electoral Pamela San Martín que también formó parte de esta Comisión. _____

Esta instancia del Consejo General, tuvo un total de 39 sesiones a lo largo del Proceso Electoral, 11 fueron ordinarias y 28 de carácter extraordinarias, es una Comisión que como se podrá advertir tuvo muchas más sesiones que en Procesos Electorales precedentes, poco más de 3 sesiones en promedio por cada uno de los meses en los cuales funcionó. _____

Se atendieron, un total de 332 asuntos que se materializaron en 62 Proyectos de Acuerdo que fueron traídos a la consideración de este cuerpo colegiado, 156 Informes sobre temas de la competencia de la Comisión, y se revisaron también 25 respuestas a consultas de los órganos electorales de los estados; así como un universo adicional de otros 89 temas que fueron sometidos a esta Comisión. _____

Quiero mencionar que entre los datos más relevantes, le correspondió a la Comisión coordinar la parte relativa a la integración de Mesas Directivas de Casillas y donde se participó en la supervisión de la contratación de 38 mil 848 capacitadores, 6 mil 289 supervisores electorales, y por supuesto durante la primera etapa de la capacitación, la notificación a 11 millones y medio de personas que fueron participantes en el procedimiento de integración de casillas. _____

Para la segunda insaculación, llegamos con 2.7 millones de personas para la integración final de Mesas Directivas de Casillas, que fueron en un universo de 1 millón 400 mil 229 personas; quiero decir que, de ese universo requerido, contamos con la gran mayoría en las Mesas Directivas de Casilla durante la Jornada Electoral. _____

También, la Comisión exploró un criterio que fue la reutilización de los materiales electorales de otros procesos que hemos tenido y que estaban en condiciones de uso, de tal manera que del 1.2 millones de materiales entre las urnas, los cancelos, etcétera, solamente se produjeron para este Proceso Electoral en términos de reposición 562 mil diversos materiales electorales que implicaron, por ejemplo, toda la logística que se requiere en estos casos. _____

También quiero decir, que el Instituto, en la impresión de las boletas electorales, trabajó con 2 mil 145 toneladas de papel seguridad traídos desde Chihuahua. Y quiero hacer un comentario específico sobre los esquemas de seguridad que se tuvieron durante el Proceso Electoral, donde contamos con el valioso apoyo de instancias como la Secretaría de la Defensa Nacional, que aportó para la custodia en 260 Distritos un universo de 3 mil 453 elementos de la propia Secretaría de la Defensa. _____

La Secretaría de Marina nos apoyó en 27 Distritos con 327 elementos distintos y, en el caso del estado de Chiapas, que históricamente desde 1994 se trabaja la custodia con

la Policía Estatal hubo 65 efectivos de la Policía Estatal que permanentemente cubrieron los 13 Distritos, hablamos de un universo total de 3 mil 845 personas que trabajaron en este importante tema, por lo cual yo quisiera dejar constancia del más amplio reconocimiento de la institución, tanto a la Secretaría de la Defensa, como de la Secretaría de Marina, y vuelvo a insistir, particularmente a la Policía Estatal del estado de Chiapas que nos apoyó tan bien en esta materia._____

La Comisión también trabajó con los diversos Sistemas que hicieron posible la información relativa al desahogo de la Jornada Electoral, así que, por ejemplo, el Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) nos presentó a las 11:00 horas el 55 por ciento de la información sobre las casillas electorales, a las 12:00 horas ya contábamos con el 74 por ciento de esa información y finalmente, cerramos con el 99.99 de las 156 mil 807 casillas que fueron aprobadas por los Consejos Distritales, esta institución da cuenta de que solo en 16 casos las casillas no se instalaron y eso nos lleva a un promedio superior al 99 por ciento en la instalación de las Mesas Directivas de Casilla._____

Quiero resaltar que esta Comisión, por primera vez en el trabajo que ha tenido como Comisión Unida del Proceso Electoral, participó en la supervisión de los diversos Sistemas de carácter informático que son responsabilidad de la Unidad Técnica de Servicios de Informática de la institución, y también en diversos temas en coordinación con la Comisión del Voto de los Mexicanos en el Extranjero, le agradezco mucho al Consejero Electoral Enrique Andrade la colaboración que tuvimos para este asunto.____

De manera particular, quiero agradecer también a la Secretaría Ejecutiva de la institución y a la Unidad Técnica de Planeación por la coordinación que tuvimos para conocer periódicamente los avances del Calendario y del Plan Integral del Proceso Electoral que fue sometido a esta Comisión._____

Diversos temas como los acuerdos en materia de ampliación de derechos para las personas con alguna discapacidad en la integración de casillas o el derecho de las personas Trans, también fueron discutidos en el seno de la Comisión, con la

participación incluida de manera muy intensa del Consejero Presidente de la institución y de los diversos Consejeros y Consejeras Electorales._____

Reconozco el trabajo que el Profesor Miguel Ángel Solís hizo como Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Secretario Técnico de la misma y todo su equipo de trabajo, lo mismo que el Maestro Roberto Heycher Cardiel que igualmente fungió como el segundo Secretario Técnico de la Comisión y todo el equipo de trabajo que tuvimos para poder desahogar los diversos temas de las Estrategias de Educación Cívica, la promoción del ejercicio del voto y todos los materiales de capacitación electoral de elecciones federales y locales que fueron coordinados desde estas instancias._____

Particularmente le quiero agradecer al Director Jurídico, al Licenciado Gabriel Mendoza, a la Titular de la Unidad Técnica de Planeación, la Ingeniera Ana de Gortari y también le quiero agradecer al Titular de la Unidad de Vinculación con Organismos Públicos Locales su presencia permanente en estas Comisiones que fueron de una enorme utilidad y lo mismo en su momento a otras instancias, como la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, que igual nos apoyó para diversos asuntos._____

A los Consejeros Electorales que me permitieron la Coordinación de la Comisión, les agradezco mucho esta invaluable oportunidad, por la experiencia que se pudo adquirir, a los partidos políticos que participaron intensamente en más de 40 reuniones de trabajo que tuvimos específicamente._____

Para los temas en particular, a quienes integraron conmigo la Comisión, muchas gracias por la oportunidad y están ahí los resultados del Proceso Electoral._____

Es todo, Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños._____

Al no haber más intervenciones, procederemos ahora con el Informe identificado en el orden del día con el número de apartado 3.4, respecto al que quiere intervenir el representante del Partido del Trabajo, tiene el uso de la palabra el Maestro Pedro Vázquez._____

El C. representante del Partido del Trabajo, Maestro Pedro Vázquez González:

Gracias, Consejero Presidente. _____

Buenas tardes Consejeras, Consejeros Electorales y representantes de los partidos políticos. _____

Expresaremos algunas opiniones en relación al Informe que presenta el Comité de Radio y Televisión que preside el Consejero Electoral Doctor Benito Nacif; el Modelo de Comunicación Política cumple 10 años de operación, en estos 10 años uno de los más grandes retos que debería de sortearse era el de la administración de la prerrogativa en Radio y Televisión de los partidos políticos. _____

A pesar de que el Partido del Trabajo estuvo, está y estaremos en contra de ese infame reparto de spots proporcional, del 30 por ciento igualitario y del 70 por ciento proporcional a la votación, hemos sido testigos de que los millones de spots de los partidos políticos y de las autoridades electorales se han manejado de manera adecuada y eficiente, por lo tanto, es este Informe de la década y que da testimonio de que el tema no está agotado, sino que elección tras elección siguen presentando retos importantes a resolver en materia de radio y televisión. _____

El Partido del Trabajo acompaña el Informe que presenta el Consejero Electoral Benito Nacif al frente de este Comité de Radio y Televisión, el cual da cuenta de la celebración de 13 sesiones ordinarias y 15 especiales, así como 17 reuniones de trabajo en las cuales se aprobaron 118 acuerdos; fuimos testigos de la operatividad en el Modelo de Comunicación Político-Electoral en un permanente dinamismo de sus particularidades y alcances en el Proceso Electoral Federal y en los 30 Procesos Electorales del ciclo 2017-2018. _____

Esto permitió llegar a cifras colosales que se acercan a la transmisión de más de 57 millones de spots en radio y televisión en los tiempos del Estado. _____

Este Informe da cuenta de las actividades implementadas para definir los mecanismos y unidades de medida para distribuir el tiempo en radio y televisión que conforme a la Ley corresponde a los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes en los diferentes Procesos Electorales. _____

Con mucho éxito se aprobaron, modificaron y ordenaron alrededor de 173 mil órdenes de transmisión y notificaciones de las pautas de transmisión de promocionales._____

Se determinó satisfactoriamente el alcance y modalidades del monitoreo para la verificación del cumplimiento de las pautas, comprobamos que nuestros spots se transmitieron y los que no fueron requeridos legalmente._____

Con eficiencia se comportó el Sistema de Recepción de Materiales de Radio y Televisión que pasó a ser electrónico en la regulación de los términos y condiciones para la entrega de materiales de Radio y Televisión a la autoridad electoral._____

Se cuenta al día de hoy, con un Catálogo de Radio y Televisión más actualizado y que lo integran 3 mil 11 emisoras que transmiten la aprobativa de los partidos políticos, sin embargo, a juicio del Partido del Trabajo, también hay temas que aun cuando fueron aprobados no están del todo agotados._____

Es el caso de los mapas de cobertura acerca de los cuales hemos hecho varias observaciones sobre el marco geográfico que consideramos tienen muchas inexactitudes, por lo que en este tema seguiremos insistiendo._____

Otro tema, es el que habremos de seguir trabajando en el Comité y es en lo concerniente a las modificaciones y al Reglamento de Radio y Televisión y muy particularmente lo que tiene que ver con la reducción de los tiempos para la transmisión de los spots partidarios._____

No quitaremos el dedo del renglón para que los avances tecnológicos en esta materia tengan el sustento legal respectivo._____

Sin más, reiteramos, acompañamos el presente Informe en el entendido de que aun cuando se dieron los inevitables encuentros, 10 encuentros al interior del Comité, siempre se favoreció el diálogo, el análisis y la opinión y la participación en un clima de libertad y de cara a la búsqueda de los consensos._____

Por su atención, gracias._____

Es cuanto, Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias a usted señor representante._____

Damos paso a las intervenciones relativas al Informe que presenta la Comisión de Quejas y Denuncias, es decir, el que está identificado en el orden del día con el número de apartado 3.5._____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela._____

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente._____

Simplemente para resaltar el trabajo que se hizo en la Comisión, tuvimos un total de 103 sesiones a partir del 8 de septiembre de 2017 al 6 de septiembre de este año, sin lugar a duda es la Comisión que más carga de trabajo tiene y que tiene que estar sesionando de manera constante._____

Se resolvieron, un importante número de asuntos, en relación con las medidas cautelares se emitieron 202 acuerdos y también lo que me interesa mucho resaltar es que de estos 202 acuerdos solamente se impugnaron 71 que es el 35 por ciento aproximadamente y de esos solamente 3 fueron revocados._____

Creo que esto habla muy bien de la calidad técnica de los trabajos de la Comisión de Quejas y Denuncias y obviamente esto es gracias al trabajo que a su vez hace la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, cuyo titular es el Maestro Carlos Ferrer y también quería agradecer ese trabajo y esos buenos resultados porque es un trabajo muy técnico, jurídico y que a veces se tienen que ir adoptando en criterios novedosos y realmente se han estado asumiendo y no tenemos gran problema._____

Lo mismo ha sucedido con la cuestión de los Procedimientos Ordinarios Sancionadores, en este periodo que se está reportando, se presentaron en el Consejo General 82 Proyectos de Resolución, y de estos solamente 22 fueron impugnados, estamos hablando del casi 27 por ciento, y de estos, sí nos revocaron solamente 4 asuntos de todos estos que se emitieron._____

Esto, vuelve a reiterar, el trabajo y la calidad técnica de la Unidad de lo Contencioso Electoral, y agradecería también esta oportunidad, para darles las gracias a todo el personal que integra esa Unidad Técnica de lo Contencioso, a su titular y también la confianza que depositaron la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala y el Consejero

Electoral Benito Nacif, y los demás integrantes del Consejo Nacional al permitirme presidir esta Comisión de Quejas y Denuncias._____

Estoy segura que los trabajos van a seguir siendo de alta calidad, y estaremos ahí también presentes, ahora simplemente como una integrante de esta Comisión._____

Gracias Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela._____

Tiene la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel para intervenir respecto del apartado 3.8, es decir, el Informe a la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional._____

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Muchas gracias, Consejero Presidente._____

Me parecía relevante participar en este apartado para destacar algunas de las actividades que ha hecho la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, que, si bien esto redundó en actividades a la propia Comisión, a final de cuentas demuestra el trabajo que hizo esta Dirección aún durante el Proceso Electoral que, como lo he mencionado, generalmente esta Dirección tiene una dinámica distinta y contraria al resto de este Instituto._____

Algunas tan solo de estas actividades es que se actualizaron Lineamientos de la Maestría del Premio Especial al mérito extraordinario, Lineamientos del Programa de Formación del Instituto Nacional Electoral y el Sistema Organismo Público Local, de la evaluación del desempeño, Instituto Nacional Electoral y Organismo Público Local, del concurso público y de cambios de adscripción del Sistema Instituto Nacional Electoral, el Catálogo de Cargos y Puestos en los rubros de competencias, conversión y desincorporación de cargos y puestos de la Unidad Técnica de Fiscalización y de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos._____

En el Sistema Organismo Público Local ingresaron 364 miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional durante este año._____

Se concursaron las plazas por instrucción directa de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la Unidad Técnica de Vinculación, de la Unidad Técnica de Fiscalización y de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Es así que ingresaron 243 miembros al Servicio Profesional Electoral Nacional, ingresaron 158 miembros del Servicio Profesional mediante el uso de la lista de reserva de la primera y segunda Convocatorias; se otorgaron prórrogas para el cumplimiento de requisitos de escolaridad de certificación a 5 miembros del Servicio Profesional considerando que estábamos en Proceso Electoral._____

Se otorgaron también la incorporación de 73 plazas de los Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio Profesional._____

Hubo 20 cambios de adscripción por necesidades del Servicio; y se estableció un régimen de excepción para que se pudieran ocupar vacantes del Servicio Profesional a través de encargadurías del despacho para que tuviéramos esos lugares ocupados considerando el Proceso Electoral que estábamos llevando acabo._____

Se impartieron 13 cursos en línea, también hubo 5 mil 353 capacitaciones a miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema Instituto Nacional Electoral y 1 mil 925 capacitaciones a miembros del Servicio Profesional Electoral del Sistema Organismo Público Local._____

Se creó el Centro Virtual Instituto Nacional Electoral y se comenzó a trabajar en él. Hubo también la impartición de 1 mil 208 asesorías a cargos o puestos, 609 del Instituto Nacional Electoral y 599 del Organismo Público Local. Se autorizaron 50 actividades externas, 11 docentes y 39 académicas, y está en curso una cuestión excepcional, la capacitación de Legisladoras para cursos de negociación y de medios de comunicación._____

Esto es relevante porque dio la oportunidad de que, a través del Centro Virtual Instituto Nacional Electoral se pudieran abrir estos cursos en línea de primer nivel, no nada más para que fueran utilizados por los miembros del Servicio Profesional sino para personas externas, en este caso, Legisladoras._____

Actualmente hay un total de 672 funcionarios inscritos en la Maestría, 79 titulados, 70 egresados del Diplomado en línea realizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León y 2 que están elaborando su Tesis._____

En el Sistema Organismo Público Local, se les reconoció titularidad a 12 miembros del Servicio Profesional, se otorgaron 151 promociones en rango a miembros del Servicio Profesional del Sistema Instituto Nacional Electoral, y se entregaron 329 incentivos en el Sistema del Instituto Nacional Electoral._____

Quiero aprovechar también, desde luego, para agradecer a los integrantes de la Comisión del Servicio Profesional, desde luego, sin su colaboración y la de su equipo de asesores y asesoras no se hubiera podido llevar a cabo todo este trabajo durante todo este año de gestión en la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional.____

Gracias, Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel._____

Permítanme hacer una intervención ahora respecto del apartado 3.9, el que tiene que ver con la Comisión de Fiscalización._____

Esencialmente para compartir con este Consejo General una buena noticia que se deriva del trabajo que en materia de fiscalización ha realizado esta autoridad electoral en el último año, tanto por lo que hace al trabajo específico de la Unidad Técnica de Fiscalización, como al acompañamiento y decisiones que ha venido tomando la Comisión de Fiscalización, y lo que en esta materia este Consejo General ha venido resolviendo._____

Esta noticia, y quiero aprovechar este espacio porque es, al final, un reporte, un Informe de los trabajos a lo largo de un año y esta es una derivación de ese trabajo._____

Me permito compartir con ustedes que el Instituto Nacional Electoral ha sido notificado que ganó el primer lugar, dentro de las instituciones federales, del concurso denominado “Premio a la Innovación en Transparencia 2017”, que convocan el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI; el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP; la Organización para

la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD; así como la Secretaría de la Función Pública Federal. ____ El premio lo obtuvo la Unidad Técnica de Fiscalización dentro de 82 participantes por la instrumentación del Portal de Rendición de Cuentas y Resultados de la Fiscalización, que como ustedes saben fue una ventana, un módulo, del Sistema Integral de Fiscalización que permitió que estas campañas electorales, que las Precampañas respectivas pudieran ser las más auditadas desde el punto de vista ciudadano de la historia, mismo que fue diseñado y desarrollado por personal del Instituto Nacional Electoral como ustedes saben, por iniciativa propia, como un ejercicio multidisciplinario para contribuir a la eficacia de los objetivos de esta autoridad electoral en esta materia, y sin la erogación de recursos públicos adicionales. _____

Es importante destacar que desde el 18 de julio de 2016, cuando se puso a disposición de la ciudadanía esta herramienta de consulta, el portal ha registrado 118 mil 226 visitas; la información de este portal, como ustedes saben también se actualiza cada 24 horas con lo que durante las campañas pasadas este portal permitió un seguimiento puntual diario de distintos medios de comunicación y organizaciones de la Sociedad Civil que generaron un contexto de exigencia a los propios actores políticos a partir, insisto, de la visibilidad de su reporte de ingresos y gastos, esto permitió además que cualquier interesado desde cualquier parte del mundo pudiera conocer y pueda conocer la forma en que los partidos políticos ejercen el dinero que se invierte en las elecciones con un detalle inédito y prácticamente en tiempo real. _____

A través de este portal fue posible mantener informada a la ciudadanía, como decía, organizaciones de la Sociedad Civil, medios de comunicación también sobre el Proceso de Fiscalización, la evolución del Proceso de Fiscalización que culminó en lo que hace a las elecciones de este año, en la auditoria en menos de 40 días de todos los ingresos y gastos que reportaron los casi 18 mil candidatas y candidatos de todo el país durante las campañas que culminaron con la Elección del 1 de julio pasado. _____

Este premio, por cierto, es el segundo que obtiene la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral a partir de la instrumentación del nuevo Modelo de Fiscalización con lo que representa, me parece un trabajo, un reconocimiento al trabajo técnico innovador incansable del personal de esta institución que se dedica a las tareas de fiscalización._____

Permítanme aprovechar, este Informe para felicitar al personal de la Unidad Técnica de Fiscalización por el gran trabajo que han realizado en los últimos meses, en particular quiero felicitar a la Dirección de Programación Nacional de Fiscalización, responsable de la operación del Sistema, su Directora por la creatividad, profesionalismo e imparcialidad con la que día a día realizan su trabajo._____

Me permito también a nombre de las y los Consejeros Electorales extender esta felicitación a la Unidad Técnica de Fiscalización, también a quienes dentro de este Consejo General integran a la Comisión respectiva por la guía que han desempeñado y en general a todo el personal que desde las oficinas centrales y en las entidades federativas ha contribuido a que la Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, sea un ejemplo comprobable de transparencia e innovación en México y en el mundo._____

Algo que está siendo reconocido en México y fuera del país y que nos permite y me permite reiterar lo que en esta sesión del Consejo General, señalé hace algunas semanas. En este año se desplegó el ejercicio más grande, más exhaustivo, más puntual y mejor realizado en materia de Fiscalización, de los que ha llevado a cabo esta autoridad y simple y sencillamente quiero aprovechar para no extender o hacer una intervención adicional, mi felicitación y reconocimiento a todos los colegas del Consejo General que integran las Comisiones y que han desarrollado los trabajos que con los informes que hoy se presentan reflejan las labores del último año._____

Felicidades a todas y todos ustedes._____

Si no hay más intervenciones, damos por recibidos los Informes de las Comisiones que integran este punto del orden del día._____

Le pido al Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente asunto de esta sesión.

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente asunto es el relativo al Informe Final de Actividades del Plan Integral de Trabajo del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales 2017-2018._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario del Consejo._____

Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Informe.____
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Enrique Andrade._____

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejero Presidente._____

Muy buenas tardes a todas y a todos._____

De manera breve nada más para resaltar algunos antecedentes del nuevo Modelo de Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero que se implementó con la Reforma del año 2014 y lo que dio la posibilidad de elegir la gubernatura de las entidades federativas, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en las entidades cuya Legislación reconoce este derecho además de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y las Senadurías por el Principio de Representación Proporcional._____

El nuevo Modelo, también como sabemos, incluye la tramitación de la Credencial para Votar desde el extranjero en las oficinas habilitadas en las sedes consulares de México en el mundo, regular las modalidades para el registro y votación desde el exterior, así como la facultad del Instituto Nacional Electoral para establecer Lineamientos con los Organismos Públicos Locales a fin de garantizar el Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero en las entidades federativas correspondientes._____

Como sabemos, el pasado 1 de julio se celebraron las Elecciones Ordinarias, Federales y Locales Coincidentes con la Federal para renovar más de 3 mil 400 cargos de elección popular._____

Por lo que respecta al voto extraterritorial además de las Elecciones Federales de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y Senadurías, las entidades de Chiapas,

Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán, previeron en su normatividad la posibilidad de elegir al Titular del Poder Ejecutivo Estatal._____

Entre las principales actividades que se relatan en el Informe, destaca la Estrategia Integral de Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero que enfatizó las secciones institucionales para promover la credencial de elector, el derecho a votar desde el lugar de residencia, la información sobre los cargos de elección popular en los comicios federales y locales, los requisitos y pasos para ejercer el voto por la vía postal e incrementar el interés y la participación ciudadana en las elecciones mediante la educación cívica y la implementación de una mejor cultura democrática._____

También destacan la Estrategia de Capacitación y Observación Electoral del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, el Concurso para la Promoción del Voto que se hizo con las organizaciones migrantes, los foros y encuentros con comunidades de mexicanos en el exterior, organizaciones civiles, universidades, medios de comunicación, consulados, Gobiernos del ámbito Federal y Estatal, partidos políticos y autoridades electorales, la estrategia digital y las campañas de activación presencial y en redes sociales por mencionar algunas de las actividades que se relatan en el Informe._____

Por otra parte, el Informe también destaca la expedición de los Lineamientos para la Organización del Voto Postal que finalmente se incorporaron en el anexo 21 del Reglamento de Elecciones y cómo regulan los aspectos relativos a la emisión del voto en la modalidad postal, la definición de los documentos y materiales electorales y el escrutinio y cómputo de la votación emitida en el extranjero que finalmente como sabemos, se hizo en el Tec de Monterrey el día de la Jornada Electoral._____

A su vez, se refiere a la aprobación de los Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de Electores, los cuales se diferencia de las Elecciones 2006 y 2012, implementaron mecanismos que favorecen al procesamiento de las solicitudes de inscripción por la vía electrónica, tanto por Internet como por teléfonos móviles y asimismo, se ampliaron los plazos para el registro que antes eran al mes de diciembre y en este año se prolongó hasta el mes de marzo._____

Como sabemos, por lo que respecta al Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, las Elecciones del 1 de julio constituyen la primera experiencia del sufragio extraterritorial después de la Reforma de 2014 que contempla la organización del voto desde el extranjero bajo la conducción del Instituto Nacional Electoral._____

La Lista Nominal de Electores estuvo conformada por un total de 181 mil 873 registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en el extranjero, 44.64 por ciento de mujeres y 55.36 por ciento de hombres, se recibieron finalmente 98 mil 470 votos para la Presidencia y 98 mil 742 votos para Senadurías._____

Además de los resultados de la votación en las elecciones locales de las 7 entidades federativas con voto de los mexicanos en el extranjero, cabe decir que en estas entidades cada una de ellas superó el voto recibido en anteriores ejercicios._____

Recibimos por primera vez, votos provenientes de 120 países en el mundo._____

Agradezco, por supuesto, el acompañamiento de mis colegas Consejeros Electorales, en forma particular a los integrantes de la Comisión, la Consejera Electoral Adriana Favela, el Consejero Electoral Ciro Murayama, el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, el Consejero Electoral Benito Nacif, de las y los representantes de los partidos políticos, tanto en la Comisión Nacional de Vigilancia como en la Comisión Temporal, y en este Consejo General para poder adecuar algunas disposiciones con el ánimo de favorecer una mayor participación._____

Agradezco la colaboración de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de sus consulados y embajadas, que participan en la credencialización y nos acompañaron en la difusión de este derecho._____

A los líderes de las comunidades de los mexicanos residentes en Estados Unidos, academia y medios de comunicación, que se solidarizaron con el Proyecto e impulsaron la promoción del derecho al voto._____

A la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, y a todas las áreas involucradas en el Proyecto como Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Comunicación Social, Unidad técnica de Servicios de Informática, la

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y, por supuesto, el Secretario Ejecutivo y al Consejero Presidente por su apoyo y colaboración en el Proyecto. _____

Para que los recursos destinados a este Proyecto de Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, no se vean solamente como un gasto, sino como lo que fue: una inversión, es necesario dar continuidad al trabajo realizado, y mantener tanto los vínculos con la comunidad mexicana por parte del Instituto Nacional Electoral, y en su caso de los Organismos Públicos Locales Electorales, como el análisis permanente de las áreas de oportunidad para mejorar el Modelo de Votación desde el exterior. _____

Es importante también seguir haciendo consciencia de que los mexicanos en el extranjero han ya manifestado su deseo de participar en la vida política del país, y que ojalá podamos sumar esfuerzos con otras instancias tanto gubernamentales como de la Sociedad Civil, aquí y en Estados Unidos para poder promover de forma decidida su participación y una mayor cultura política. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade. _____

Si no hay más intervenciones, damos por recibido el Informe que nos ocupa y le pido al Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente punto. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe Final sobre el seguimiento al procedimiento de acreditación de las y los observadores electorales en el Proceso Electoral 2017-2018. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Está a su consideración el Informe mencionado. _____

Al no haber intervenciones, damos, por recibido el Informe, y le pido al Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente asunto. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe Final del seguimiento al Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2017-2018. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias. _____

Colegas, está a su consideración el Informe. _____

Tiene el uso de la palabra el Secretario del Consejo. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Muchas gracias, Consejero Presidente. _____

Muchas gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. _____

Desde el Proceso Electoral Federal del año 2000, el Instituto estableció instrumentos de seguimiento y de planeación para identificar el cúmulo de actividades involucradas y los responsables de realizarlas, de entonces a la fecha hemos trabajado en la mejora de estos instrumentos, así pasamos de tener un Calendario de Actividades Relevantes a contar con un Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral, que además de incluir las actividades a realizar cuenta con un estrategia y metodología de seguimiento que permite tener un control estructurado del avance de cada una de ellas. _____

Como lo mencioné en la sesión de la Junta General Ejecutiva en donde se presentó el Informe que ahora está a su consideración, el Proceso Electoral hizo una sucesiva relación de actividades, en donde cada una de ellas se encuentra relacionada y vinculada con otras, por lo que, si una tarea no se realiza o se retrasa, puede tener como consecuencia la afectación a otras, de ahí la importancia de tener toda esta información en un solo mapa, que nos vaya indicando en dónde se presentan dificultades y cómo éstas afectan diversas funciones, naturalmente este seguimiento ha cobrado una mayor relevancia, luego de la Reforma del año 2014, que volvió mucho más compleja la organización de las elecciones, debido al involucramiento del Instituto Nacional Electoral en las tareas sustantivas de los Procesos Electorales Locales. _____

El conjunto de actividades comprendidas en el Plan y Calendario Integral, abarcan la totalidad de las tareas sustantivas asociadas a la organización electoral e identificar

desfases, así como conocer de las dificultades que se presentaron en el desarrollo de cada una de ellas._____

Así, durante el Proceso Electoral 2017-2018, gracias al seguimiento realizado, contamos con soluciones oportunas y la toma de decisiones inmediatas para corregir las eventualidades enfrentadas._____

El Informe que está a su consideración muestra el trabajo realizado desde la construcción y aprobación del Plan y Calendario Integral, hasta el seguimiento que se llevó a cabo en la Comisión de Capacitación y Organización Electoral._____

Y aprovecho la oportunidad para reconocer a la Presidencia del Consejero Electoral Marco Antonio Baños y a los integrantes de lo que llamamos Comisiones Unidas por el acompañamiento y el seguimiento al Plan y Calendario Integral y las observaciones que nos hicieron llegar para mejor al cumplimiento de nuestras tareas._____

De la misma manera, la revisión que sistemáticamente hicimos con la estructura ejecutiva del Instituto, prácticamente toda la Junta General Ejecutiva estuvo trabajando sistemáticamente en este seguimiento, y quiero agradecerles a mis colegas, integrantes de la Junta General Ejecutiva, por ese acompañamiento, ese seguimiento y la disciplina que implica el mismo._____

Con el Plan y Calendario Integral y con sus informes presentados en las sesiones ordinarias de este órgano colegiado, todos los involucrados al igual que la ciudadanía, pudimos observar el avance de las 703 actividades realizadas por el Instituto para el Proceso Electoral._____

De esta manera estuvimos en condiciones de reportar mes con mes el estado de cada actividad, sus entregables y, en caso de haberse presentado algún desfase, se ofreció una explicación de la situación ocurrida, así como de su solución._____

Contar con indicadores para cada una de las actividades permitió tomar decisiones preventivas y correctivas, previo a que las actividades se incumplieran o pudieran causar alguna afectación a los objetivos del Proceso Electoral._____

El resultado, un proceso ordenado, bajo control, en el cual todas las actividades se cumplieron a cabalidad y en todos sus extremos._____

Desde mi perspectiva el Plan y Calendario Integral se ha convertido en un elemento fundamental de la organización electoral, es casi inconcebible el cumplimiento del tan importante número de atribuciones que tenemos como Instituto sin la utilización de herramientas de planeación como esta._____

Quiero destacar que la utilización de herramientas de seguimiento y control como el Plan y Calendario Integral, requieren de la participación activa de toda la estructura del Instituto, ya que de ellos depende la identificación de actividades, el reporte regular de sus avances, las justificaciones pertinentes en caso de desfases, así como las propuestas para su atención._____

Además, este trabajo pudo realizarse gracias al apoyo de la Unidad Técnica de Planeación para la integración de la información y su presentación, así como para la actualización de la plataforma sobre la cual estuvimos trabajando._____

Si bien el Proceso Electoral Federal ya concluyó, aún tenemos 35 actividades que se encuentran en curso, dado que están relacionadas con la presentación de informes y evaluaciones que finalizarán durante el último trimestre de este año, sin embargo, es posible presentar este Informe Final, ya que han concluido con éxito las actividades vinculadas con los objetivos del Proceso Electoral._____

Señoras y señores Consejeros, la organización del Proceso Electoral y la planeación realizada nos permite mostrar los pasos que como Instituto dimos para alcanzar los objetivos planteados, que se resumen en una gran meta, que el 1 de julio la ciudadanía contara con los elementos necesarios y las garantías indispensables para ejercer su derecho al voto libre._____

Es cuanto._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario del Consejo._____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños._____

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente._____

Solo para dejar testimonio de mi reconocimiento por la coordinación que tuvimos para este tema con la Secretaría Ejecutiva y con la Unidad Técnica de Planeación, ciertamente es un instrumento que nos permite ir revisando día a día, yo diría, momento a momento cómo va el desahogo de las diversas actividades del Proceso Electoral y es un instrumento que se volvió estratégico para la toma de las decisiones en las diversas actividades del Proceso Electoral._____

Fueron un universo inicial de 710 actividades, solo 7 fueron al final desincorporadas, lo cual nos ha dejado un universo total de 703 actividades que desahogaron las áreas ejecutivas y técnicas de nuestra institución; la carga más fuerte de estas actividades quedó concentrada al final de cuentas en 5 de las Direcciones Ejecutivas que significan el 82 por ciento de todas las actividades del Calendario y del Plan Integral del Proceso Electoral, 162 en la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, que son el 23.2 por ciento del total, 126 en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral que fueron el 17.9 por ciento._____

Un universo también de 112 actividades en la Unidad Técnica de Servicios de Informática que son el 15.9 por ciento y 96 actividades en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, que son el 13.6 por ciento, es decir, en 5 de las áreas de nuestra institución cayó el 82 por ciento y quisiera dejar también testimonio de mi más amplio reconocimiento a todos los titulares de las áreas ejecutivas y técnicas y por supuesto, a través de estas áreas ejecutivas y técnicas del ámbito central está reflejado también el trabajo de la estructura desconcentrada._____

Así que, enhorabuena, sobre todo por la forma en que se pudo depurar este instrumento, particularmente para la toma de las decisiones y para el seguimiento del Proceso Electoral y obviamente, la ingeniera Ana de Gortari jugó aquí un papel fundamental al irle dando seguimiento día a día a las actividades de las áreas ejecutivas de la institución, sus titulares fueron también claves para mantener al día este instrumento, así que muy bien por el Informe y muchas gracias._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños._____

Permítanme muy rápidamente intervenir para hacer un reconocimiento, finalmente, lo que ocurrió el 1 de julio no fue algo esporádico, algo casual, por supuesto que ese día millones y millones de mexicanas y mexicanos ejercieron libremente su voto, decidieron quiénes los gobernarían en los distintos cargos federales, locales y municipales en disputa con total y absoluta autonomía porque tuvieron las condiciones para que ello ocurriera y esas condiciones no resultaron de una generación espontánea, son el resultado de un trabajo planeado bajo las pautas y directrices que la propia Ley establece, que se ejecutó puntualmente por parte de las distintas áreas responsables de esta autoridad electoral y que se concretó día a día conforme a la ruta que, repito, la Ley y específicamente esta autoridad electoral había planeado._____

Lo que hoy estamos conociendo es el Informe Final de un proceso que por donde se le quiera ver, es un proceso exitoso, porque ese proceso exitoso, insisto, es la garantía fundamental de que se cumplen en este país los esquemas, las previsiones para el ejercicio libre del voto._____

Lo que hoy estamos conociendo es un Informe en donde eventualmente se señala a las áreas que tendrán que robustecerse en el futuro pero que constituyen, repito, la rendición de cuentas por parte de esta institución de un trabajo que permitió a la ciudadanía apropiarse del Proceso Electoral y con ello, apropiarse de la decisión de su futuro político._____

Este Informe no es un asunto, no es un Informe menor que simple y sencillamente da cuenta del trabajo realizado, es también la mejor manera de evidenciar cómo la ruta puntual, específica, pausada pero claramente cumplida, generó esas condiciones que permitieron, repito, que el 1 de julio tuviéramos no solamente la Elección más grande de nuestra historia, la más compleja desde el punto de vista organizativo, la más explicada luego de una intensa actuación pedagógica por parte de todos y cada uno de quienes integramos este órgano electoral, sino también estoy convencido, la más libre de nuestra historia._____

Éste, me parece es un mecanismo en el que con transparencia se aplica el principio de rendición de cuentas que esta propia autoridad es a la que esta autoridad está obligada

con la presentación de este Informe en donde puede constatarse como se ha señalado, el cumplimiento específico y oportuno de todas y cada una de las actuaciones que resultaban indispensables, es este Informe un ulterior documento que constata, insisto, el éxito que la sociedad mexicana pudo constatar y, por otro lado, ejercer a través de la Jornada Electoral del 1 de julio pasado._____

Se trata de una oportunidad, además más allá de dar cuenta del esfuerzo, de la precisión del trabajo realizado por parte de las distintas áreas de la institución para poder hacer un reconocimiento desde este Consejo General a todos aquellos múltiples actores de cuya responsabilidad o corresponsabilidad dependía la buena llegada a puerto de la elección, una buena llegada a puerto que nos permite hoy enfrentar como sociedad los grandes problemas nacionales de pobreza, de desigualdad, de corrupción, de impunidad, de inseguridad sin que el tema electoral sea como lo llegó a ser en el pasado, un problema que aqueje a la sociedad._____

Esto decía, fue el resultado de que esta autoridad, como revela el Informe que nos ocupa, cumplió con su mandato legal y constitucional de organizar las elecciones, de generar las condiciones y garantías para el ejercicio del voto libre y secreto, del voto informado, pero también hay que reconocer el cumplimiento y el que hayan estado a la altura de la alta vara que nos dejó la ciudadanía a los partidos políticos y a sus candidatos, a los Gobiernos que se apegaron a los principios constitucionales de imparcialidad que los obligan, a los medios de comunicación que contribuyeron a la explicación, pero sobre todo a la generación de información de la que depende el voto libre, y por supuesto, a la ciudadanía, tanto en lo individual como de manera organizada, que contribuyeron, insisto, a que esta elección fuera una elección exitosa._____

Este Informe, da cuenta del trabajo hecho por esta autoridad electoral, pero es una buena ocasión para recordar una y otra vez que le cumplimos a la sociedad mexicana._____

Si no hay más intervenciones, damos por recibido el Informe, y le pido al Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente punto del orden del día._____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe parcial que presenta la Coordinación

de Asuntos Internacionales sobre el Proyecto de Apoyo para la Observación Electoral 2018. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Está a su consideración el Informe mencionado. _____

Dado que no hay intervenciones, damos por recibido el mismo, y le pido al Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente asunto del orden del día. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el cual se emiten reglas generales aplicables al procedimiento de liquidación de los Partidos Políticos Nacionales que no obtuvieron el porcentaje mínimo de la votación establecido en la Ley para conservar su registro. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral **Ciro Murayama**. _____

El C. Consejero Electoral, Doctor **Ciro Murayama Rendón:** Gracias, Consejero Presidente. _____

Buenas tardes a todas y a todos. _____

En el año 2015 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó un Acuerdo para establecer reglas generales en relación con el procedimiento de liquidación de los Partidos Políticos Nacionales que no obtuvieron en aquel Proceso Electoral Federal, el porcentaje mínimo de la votación establecida en la Ley para conservar su registro. _____

Sin embargo, ese Acuerdo, estuvo acotado a los partidos políticos que perdieron, o perderían su registro, o que entraron en etapa de prevención al menos como resultado de la elección a la Cámara de Diputados en 2015, y es necesario por ello actualizarlo a efecto de que nos rijan también en este momento. _____

Así que, el Proyecto de Acuerdo tiene por objeto especificar en qué casos se debe liquidar el patrimonio de un Partido Político Nacional, se trata de aquellos partidos políticos que no obtuvieron el 3 por ciento de la votación en ninguna de las 3 elecciones federales, y de aquí se desprenden 2 escenarios: los partidos políticos que tampoco consiguieron el porcentaje de votación establecido en la Legislación Local, por lo que corresponde la liquidación del patrimonio completo. _____

Y segundo, los que sí obtuvieron el porcentaje establecido en la Elección Local, por lo que pueden optar por su registro como Partido Político Local. _____

En este caso se especifica que habrá 10 días a partir de que quede en firme la declaratoria de pérdida de registro, emitida por el Consejo General asunto que está agendado en esta misma sesión, y una vez que hayan concluido de forma exitosa su registro con un nuevo Registro Federal de Causantes, quedarán a salvo sus derechos sobre los bienes y prerrogativas provenientes de recursos locales que se encuentren registrados como tales en el Sistema Integral de Fiscalización. _____

Por otro lado, hay que mencionar que en el caso de que un partido político no obtuvo el 3 por ciento en la Elección Local, pero sí en la Federal, se reitera, como viene ocurriendo desde la Reforma Constitucional, la Reforma que dio lugar a la apertura política en 77, que partido político que es nacional lo es también para efectos de todas las Elecciones Locales, y no puede haber liquidación ahí. _____

Durante la prevención las prerrogativas seguirán depositándose de forma normal en las cuentas abiertas para tal efecto, y solo en caso de que el liquidador considere necesario se podrán aperturar cuantas mancomunadas distintas a las preexistentes, esto es importante, porque hace 3 años fue necesario aclarar estos procedimientos. _____

Y, una vez que inicia la etapa de liquidación los recursos invariablemente deberán ser depositados a las cuentas que genere el liquidador, es importante entonces señalar que esto nos rige a nosotros pero también a los Organismos Públicos Locales, a efecto de que depositen correctamente la prerrogativa, que no la dejen de depositar, porque no es un recurso del Organismo Público Local, sino autorizado al inicio del ejercicio para el partido político que servirá precisamente ese recurso para la liquidación, entonces

tienen que ir a la cuenta del liquidador y también es importante señalar que, dado el orden de prelación que tienen las liquidaciones no se deben estar cobrando las multas pendientes de pago tampoco en el nivel Local._____

Una de las novedades de este Acuerdo es que, durante la prevención el partido político deberá entregar un Informe respecto de los bienes y activos que componen su patrimonio para facilitar las tareas de liquidación, y también resulta relevante destacar que el Interventor podrá utilizar la información sobre el partido político que encuentra registrada en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), para lo cual podrá solicitar al responsable de finanzas o a la Unidad Técnica de Fiscalización acceso al Sistema.____

Por último, se proponen algunas disposiciones sobre los honorarios del Interventor que se contemplan básicamente en la adenda circulada por la Unidad Técnica de Fiscalización._____

Aquí estamos señalando que el pago al Interventor podrá provenir del patrimonio en liquidación del partido político, por supuesto sin afectar los derechos de los trabajadores que puedan cobrar liquidaciones, y también se considera que pueda hacerse uso de las economías generadas en prerrogativas no ejercidas, básicamente correspondientes a las partidas postal y telegráfica, a efecto de que no sea necesario usar recurso público adicional en el pago de los Interventores._____

También estamos señalando que el Contrato con los Interventores no podrá tener una vigencia superior a un año y en él se deben señalar los honorarios que van a cobrarse a efecto de que la prolongación de la liquidación no juegue contra el Instituto Nacional Electoral y sea un Contrato, llamemos así, por obra determinada y todo mundo tenga los incentivos para que estas liquidaciones se den de la manera más ágil posible y no generen cargas adicionales al Presupuesto del Instituto Nacional Electoral, podrá ampliarse, sí, si fuera debidamente justificado el Contrato para desahogar la liquidación sin que ello implique que se paguen honorarios adicionales a los pactados en el Contrato original._____

Estas reglas tratan entonces, de brindar claridad tanto a los partidos políticos involucrados, como a las autoridades locales, incluso a nosotros mismos y a los

Interventores acerca de cuál es la ruta a seguir, para hacer frente a esta eventualidad prevista en la Ley y es que existe una suerte de puerta circular de entrada y salida al Sistema de Partidos Políticos, justo se va a iniciar el periodo para que nuevas fuerzas políticas puedan llegar a la Arena Electoral Nacional y en cada Elección hay la posibilidad de que alguna o algunas fuerzas políticas dejen de ser Partidos Políticos Nacionales, así está previsto en la norma, nos corresponde entonces actuar de la manera más eficiente y ágil en esta materia._____

De eso se trata este Proyecto._____

Gracias, Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama._____

Consejero, el señor representante de Encuentro Social desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?_____

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Sí, gracias._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la palabra el Licenciado Berlín Rodríguez Soria, adelante._____

El C. representante de Encuentro Social, Licenciado Berlín Rodríguez Soria: Muchas gracias. _____

Nada más es en relación a un apartado que menciona aquí sobre el periodo de prevención, no se establece el criterio de qué momento a qué momento abarca dicho periodo, incluso fue un tema que se resolvió en una Sentencia, en un Recursos de Apelación (RAP) cuando el caso del Partido del Trabajo porque había precisamente confusión respecto de dónde a dónde abarca dicho periodo y si nos lo menciona porque no lo establece en este documento y si lo menciona, solicitaría que se agregara en atención al principio de certeza para efectos de que tengamos también en los partidos políticos que estamos en esta situación, la claridad respecto de este periodo de prevención._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para responder, tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama._____

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente._____

Creo que, está claro en el Reglamento de Fiscalización, básicamente la prevención se abre una vez que ocurre la votación y que tenemos elementos de que nos indica que hay alguna o algunas fuerzas políticas que no alcanzan el 3 por ciento en algunas de las Elecciones Federales, y justamente con la designación de los Interventores, cosa que ocurrió el 3 de julio en una sesión pasada, miento fue una vez que acabaron los cómputos, una vez que terminaron los cómputos es que tuvimos esa sesión, y ¿hasta cuándo?, hasta que se declare la pérdida de registro por el Consejo General._____

Esa fue la diferencia en el caso del Partido del Trabajo, que nosotros lo hicimos con determinación de la Junta General Ejecutiva, y el Tribunal Electoral los mandó que sea del Consejo General._____

Por eso estamos aguardando hasta la fecha del día de hoy._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama._____

El señor representante de Encuentro Social desea hacer una segunda pregunta. ¿La acepta usted?_____

El C. Consejero Electoral Ciro Muraya, si adelante._____

El C. Consejero Presidente: Tiene el uso de la palabra el Licenciado Berlín Rodríguez Soria._____

El C. representante de Encuentro Social, Licenciado Berlín Rodríguez Soria: Muchas gracias._____

La pregunta es a partir de hoy, en teoría respecto de lo que aquí se apruebe, todavía tenemos un periodo para recurrir este Acuerdo, de acuerdo a que tenemos la apelación 4 días, entiendo que hábiles ya. Y entonces ¿qué pasa?, si no ha causado estado esta Resolución, y queda una situación, todavía sub júdice hasta que no esté firme._____

Entonces, la sugerencia, ahí es donde surge la duda, todavía estaríamos esperando la respuesta de la Sala Superior, y que pudiera variar, digo, finalmente es una hipótesis que nosotros traemos, y que pudiera cambiar esta situación._____

Entonces, este periodo de prevención, creo que debería de surgir hasta que quede firme en la Resolución. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para responder tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. _____

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Bueno, lo que pasa es que en materia electoral de acuerdo al artículo 41 constitucional, la impugnación no implica la suspensión de los actos de autoridad, así que es claro que una vez que se apruebe, al día siguiente, o sea, mañana una vez que hoy se tome la votación correspondiente ya inicia el periodo de liquidación. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. _____

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación que corresponde. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto 8, tomando en consideración en esta votación la adenda y fe de erratas circuladas previamente. _____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. _____

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente. _____

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG1260/2018) Pto. 8 _____

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL CUAL SE EMITEN REGLAS GENERALES APLICABLES AL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES QUE NO OBTUVIERON EL PORCENTAJE MÍNIMO DE LA VOTACIÓN ESTABLECIDO EN LA LEY PARA CONSERVAR SU REGISTRO

ANTECEDENTES

- I. Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, se reformó el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone, en su Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, que el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos; asimismo, es autoridad en la materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, regido por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
- II. En el citado Decreto, en el artículo 41, Base V Apartado B, penúltimo y último párrafos, se establece que corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos relativas a los Procesos Electorales (federal y local), así como de las campañas de los candidatos.
- III. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos Cuarto y Quinto, contienen las facultades y atribuciones de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización respectivamente, así como las reglas para su desempeño y los límites precisos respecto de su competencia.
- IV. En la misma fecha, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos, en la que se

establece, entre otras cuestiones: i) la distribución de competencias en materia de partidos políticos; ii) los derechos y obligaciones de los partidos políticos; iii) el financiamiento de los partidos políticos; iv) el régimen financiero de los partidos políticos; v) la fiscalización de los partidos políticos; vi) disposiciones aplicables de las agrupaciones políticas nacionales y a las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político.

- V.** El 28 de septiembre de 2015, en la décima tercera sesión extraordinaria urgente de la Comisión de Fiscalización, fue aprobado el Acuerdo CF/062/2015, por el cual se emiten reglas generales, en relación con el procedimiento de liquidación de los partidos políticos que no obtuvieron el porcentaje mínimo de la votación establecido en la ley para conservar su registro.
- VI.** El 28 de octubre de 2015, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictó sentencia respecto del SUP-RAP-697/2015 y acumulados, interpuesto por el Partido del Trabajo, en cuya ejecutoría revocó el Acuerdo CF/062/2015 “ACUERDO DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL CUAL SE EMITEN REGLAS GENERALES, EN RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE NO OBTUVIERON EL PORCENTAJE MÍNIMO DE LA VOTACIÓN ESTABLECIDO EN LA LEY PARA CONSERVAR SU REGISTRO”.
- VII.** El 6 de noviembre de 2015, en sesión extraordinaria del Consejo General se aprobó el ACUERDO INE/CG938/2015. POR EL CUAL SE EMITEN REGLAS GENERALES, EN RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES QUE NO OBTUVIERON EL PORCENTAJE MÍNIMO DE LA VOTACIÓN ESTABLECIDO EN LA LEY PARA CONSERVAR SU REGISTRO, EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA SUP-RAP-697/2015 Y ACUMULADOS
- VIII.** El 16 de diciembre de 2015, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictó sentencia respecto del SUP-RAP-764/2015 y acumulados, interpuesto por los partidos MORENA, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, en cuya sentencia a pesar de determinar infundados los agravios invocados, ordena modificar el Acuerdo INE/CG938/2015, para que se rija en los términos de la propia ejecutoria.

- IX.** El 16 de marzo de 2016, en sesión extraordinaria del Consejo General, se aprobó el ACUERDO INE/CG100/2016 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO CUARTO, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LAS REGLAS GENERALES EN RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES QUE NO OBTUVIERON EL PORCENTAJE MÍNIMO DE LA VOTACIÓN ESTABLECIDO EN LA LEY PARA CONSERVAR SU REGISTRO, EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA SUP-RAP-764/2015 Y ACUMULADOS.
- X.** En sesión extraordinaria el Consejo General del INE celebrada el 8 de septiembre de 2017, se aprobó el Acuerdo INE/CG408/2017 por el que se establece la integración de las Comisiones Permanentes, Temporales y otros Órganos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como la creación de las Comisiones Temporales de Debates y para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la participación política en el marco del Proceso Electoral 2017-2018. En dicho acuerdo se determinó que la Comisión de Fiscalización estará integrada por las Consejeras Electorales Adriana Margarita Favela Herrera y Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, así como por los Consejeros Electorales Marco Antonio Baños Martínez, Benito Nacif Hernández y Ciro Murayama Rendón, quien la presidirá.
- XI.** En sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 8 de septiembre de 2017, se aprobó el Acuerdo INE/CG409/2017 mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, aprobado mediante el acuerdo INE/CG263/2014, modificado a través de los acuerdos INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015, INE/CG320/2016, INE/CG875/2016 e INE/CG68/2017
- XII.** Resultado de la Jornada Electoral del 01 de julio de 2018, correspondiente al proceso Electoral Federal 2017-2018, los partidos políticos Nueva Alianza y Encuentro Social, no obtuvieron el porcentaje mínimo de la votación válida requerida para conservar su registro como Partidos Políticos Nacionales, ubicándose en el supuesto normativo contemplado en el artículo 94, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos, por lo que la Comisión de Fiscalización el 9 de julio del año en curso designó a los Interventores que serán los responsables de la liquidación de los partidos políticos en cita durante la etapa de prevención.

XIII. Mediante oficio IEE/PRESIDENCIA/446/2018, la **Lic. Guillermina Vázquez Benítez**, Presidenta del Consejo Estatal Electoral de **Hidalgo**, en relación con el procedimiento de liquidación de partidos políticos, realizó la consulta siguiente:

1. *¿El depósito de los recursos locales a los que tienen derecho los Partidos Políticos Nueva Alianza y Encuentro Social por concepto de financiamiento público, se continuará realizando a las cuentas que tienen registradas para tal efecto o se deberán cancelar temporalmente dichos depósitos o en su caso, los depósitos se deberán realizar a alguna cuenta distinta que establezcan los Interventores o el propio Instituto Nacional Electoral?”*
2. *¿Se deberá continuar realizando el cobro de multas que actualmente se ejecutan por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo?*
3. *¿A qué área se deben notificar los montos de las multas pendientes de cobro?*

La Unidad Técnica de Fiscalización contesto en el sentido siguiente:

Con relación a la pregunta número 1, con fundamento en el artículo 385 numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, durante el periodo de prevención los administradores de los partidos políticos podrán efectuar únicamente gastos relacionados con nominas e impuestos, y, de conformidad con el artículo 386 numeral 2 del mismo ordenamiento legal, los podrán realizar sin necesidad de contar con la autorización del Interventor.

De lo expuesto en el párrafo anterior se desprende que los partidos políticos en comento, pueden disponer de los recursos derivados de sus prerrogativas, aun cuando sea solo para determinados gastos (nómina e impuestos), y con autorización del Interventor para los demás que sean indispensables para su sostenimiento, lo cual implica que deben seguir recibiendo el financiamiento público que les corresponde, en las cuentas que tienen registradas para tal efecto, pues de ello depende que puedan cubrir los gastos para cumplir sus obligaciones en los términos antes descritos.

Por lo que se refiere a la pregunta número **2**, se informó que, de conformidad con el artículo 395 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, una vez que se hayan cubierto las obligaciones que la ley determina en protección y beneficio de los trabajadores del partido político, y las obligaciones fiscales que correspondan, se pagaran las sanciones administrativas de carácter económico impuestas por el instituto.

En virtud de lo anterior, las multas pendientes de pago no deberán descontarse de las ministraciones que le correspondan al partido político en liquidación de que se trate, sino que deberán considerarse en la lista de créditos para que, una vez que queden firmes las multas impuestas por los Organismos Públicos Locales, se consideren en el orden de prelación.

Finalmente, por lo que respecta a la pregunta número **3**, los montos de las multas pendientes de cobro, deberán ser informadas al Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, y al Comité Ejecutivo Nacional de los partidos políticos correspondientes, a fin de que se incluyan en la relación de pasivos y el Interventor esté en posibilidad de incluirlas en la lista de prelación, conforme lo establece el numeral 1 del artículo 395 del Reglamento de Fiscalización.

- XIV.** Mediante oficio IEPC.SE.UTV.382.2018, el **Mtro. José Manuel Decelis Espinosa**, encargado del despacho de la Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de **Chiapas**, realizó diversos cuestionamientos relativos a los Partidos Políticos que no alcanzaron el mínimo del 3% de la votación válida nacional, mismos que se enumeran a continuación:

“Primero. ¿El Instituto Nacional Electoral emitirá alguna actualización de las Reglas Generales para el procedimiento de liquidación de los Partidos Políticos Nacionales que no obtuvieron el porcentaje mínimo de la votación establecido en la ley para conservar su registro, toda vez que en su articulado hace referencia al ejercicio anual 2015?

Segundo. ¿Es viable que este OPL emita Lineamientos que regulen el procedimiento para el reintegro de remanentes económicos y los bienes muebles o inmuebles que hayan adquirido con financiamiento estatal, de los Partidos Políticos Nacionales que no alcanzaron el 3% de la votación válida emitida, en acatamiento a lo ordenado por el Código Comicial Local en su artículo 54, numeral 4?

Tercero. Si bien es cierto las Reglas Generales no prevén una etapa de prevención para los institutos políticos que se sujetaran al reintegro de bienes y remanentes económicos, ¿es pertinente que este organismo electoral local como medida precautoria determine una etapa de prevención para los partidos políticos que no alcanzaron el umbral mínimo requerido por la ley hasta en tanto se emita la declaratoria de pérdida de acreditación y se designe un Interventor?

Cuarto. ¿Cuándo se emitirán y cuáles serían los mecanismos de coordinación entre esta autoridad y la autoridad administrativa nacional para el procedimiento de reintegro de remanentes económicos y los bienes muebles o inmuebles que hayan adquirido con financiamiento estatal de los Partidos Políticos Nacionales, a los que hace referencia el artículo 5, de las Reglas Generales?”

- XV.** Mediante oficio IEPC.P.241.2018, el Dr. Oswaldo Chacón Rojas Consejero Presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, formulo la siguiente consulta relativa al financiamiento público de los partidos políticos que pierdan su registro, al tenor literal siguiente:

“PRIMERO. Los Lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen los otrora Partidos Políticos Nacionales para optar por el registro como partido político local establecido en el artículo 95, párrafo 5 de la Ley General de Partidos Políticos, en su Capítulo II, numeral 5, prevén el plazo para que los otrora partidos nacionales soliciten a los OPLES su registro como partidos locales, dicho plazo se señala como dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la aprobación de dicha normatividad, por lo que se consulta si ¿se actualizará dicha disposición reglamentaria o deberá ser Interpretada de forma funcional a efecto de que el plazo comprendido será dentro de los 10 días hábiles posteriores a la declaratoria de pérdida de registro que realice el instituto Nacional Electoral?

Segundo. ¿Los recursos de los partidos políticos que pierdan su registro nacional y que puedan optar por ser registrados como partidos políticos locales deberán entrar en una etapa de prevención respecto de su financiamiento público, así como remanentes económicos y bienes muebles e Inmuebles hasta en tanto se le otorgue el registro local correspondiente?

Tercero. ¿Se deberá tener alguna previsión respecto del financiamiento público ordinario que es otorgado al Partido Político Nacional que vaya a perder su registro nacional y que pudiese tener el derecho a su conversión como partido político local, derivado del procedimiento de liquidación que en su momento instaure el Instituto Nacional Electoral?”

- XVI.** Con relación a las consultas realizadas por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, señaladas en los dos antecedentes previos, la respuesta a las mismas se realizó mediante oficio INE/UTF/DA/43176/2018 de fecha 31 de agosto de 2018, acorde con lo

dispuesto por el artículo 37, numeral 2, inciso f) del Reglamento de Elecciones.

- XVII.** Mediante oficio INE/STCVOPL/483/2018 el Director de Vinculación, Coordinación y normatividad de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, remitió el diverso IEES/0813/2018, por el que el Instituto Electoral del Estado de **Sinaloa**, realiza una consulta respecto del nombramiento de Interventor, relacionado con el proceso de liquidación de Partidos Políticos Locales en el estado de Sinaloa, cuya parte conducente se transcribe a continuación:

“En qué momento se deberá hacer el nombramiento del Interventor, toda vez que el partido no tiene activos ni deudas con proveedores, solo la plantilla del personal y de acuerdo con el artículo 385, numeral 3, del Reglamento de Fiscalización, el partido puede pagar sin pedir autorización, lo referente a la nómina y a los impuestos, además como organismo público local estamos obligados a aplicar la parte normativa contenida en el artículo 51, párrafo primero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, que señala que el Instituto deberá resolver sobre la cancelación de registro de un partido político, una vez que se resuelva la elección en definitiva, y el artículo 53, de la misma ley, señala que el procedimiento que inicia dando vista al partido que se haya ubicado en ese supuesto y se le otorgan treinta días para que manifieste lo que a su derecho convenga.” (...)

La Unidad Técnica de Fiscalización contesto en el sentido siguiente:

El artículo 94, de la Ley general de Partidos Políticos, señala las causas de pérdida de registro de un partido político entre otras él no obtener por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias para Diputados, Senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de un Partido Político Nacional, o de Gobernador, diputados a las legislaturas locales y ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, tratándose de un partido político local, si participa coaligado.

Por su parte el artículo 380 Bis, numeral 4 del Reglamento de Fiscalización contempla que, la liquidación de los partidos políticos locales que no hayan alcanzado el 3% de la votación válida emitida corresponde a los Organismos Públicos Locales, y, el artículo 381 numeral 1 del mismo

reglamento citado, establece que, cuando se actualice cualquiera de las causales de pérdida o cancelación de registro previstas en el artículo 94 de la Ley de Partidos Políticos la Comisión de Fiscalización deberá designar de forma inmediata a un Interventor quien será el responsable del patrimonio del Partido Político en liquidación

Por lo tanto, se deberá privilegiar la aplicación de la legislación local respecto de los procedimientos a seguir para llevar a cabo la liquidación de los partidos políticos locales que hubieren perdido su registro. Y el momento en que deberá hacerse el nombramiento del Interventor, será cuando un partido político local se ubique en el supuesto de pérdida de registro correspondiente.

Ahora bien, aun cuando efectivamente el artículo 385, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, dispone que, durante el periodo de prevención los administradores de los partidos políticos podrán efectuar únicamente gastos relacionados con nominas e impuestos, y según el artículo 386 numeral 2 del mismo ordenamiento legal, los podrán realizar sin necesidad de contar con la autorización del Interventor, dicha figura es necesaria para garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones con terceros, incluyendo los trabajadores, considerando que la etapa de prevención es preparatoria a la etapa de liquidación.

- XVI.** El Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, mediante oficio INE/DEPPP/5458/2018, solicitó datos de identificación de las cuentas bancarias a los Interventores designados como responsables del control y vigilancia del uso y destino de los recursos y bienes de los , en las que deberá depositarse el financiamiento público federal tanto para actividades ordinarias como específicas correspondientes a los meses de agosto a diciembre de 2018.

La Unidad Técnica de Fiscalización contesto en el sentido siguiente:

El artículo 385, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, durante el periodo de prevención los administradores de los partidos políticos podrán efectuar gastos relacionados con nominas e impuestos, y de conformidad con el artículo 386, numeral 2 del mismo ordenamiento, los podrán realizar sin necesidad de contar con la autorización del Interventor.

El artículo 389, numeral 1 del mismo reglamento citado establece que las prerrogativas públicas correspondientes al ejercicio fiscal en que ocurra la liquidación del partido, contadas a partir del mes inmediato posterior al en que quede firme la resolución de pérdida o cancelación de registro, deberán ser entregadas por el Instituto al Interventor.

Por lo anterior, y únicamente durante la prevención los partidos políticos en comento pueden disponer de los recursos derivados de sus prerrogativas, aunque con ciertas restricciones, es decir, deben seguir recibiendo el financiamiento público que les corresponde en las cuentas que tienen registradas para tal efecto a fin de cubrir los gastos para realizar sus actividades en los términos antes descritos, incluso sin necesidad de autorización cuando sean para el pago de nómina e impuestos, y con autorización del Interventor, para los demás gastos que sean indispensables para su sostenimiento.

Una vez que se emita el aviso de liquidación previsto en el artículo 387, del Reglamento de Fiscalización, los Interventores de ambos partidos deberán abrir las cuentas bancarias en las que se transferirán los recursos de los partidos en liquidación, así como las prerrogativas correspondientes del ejercicio, a las que aun tengan derecho para su debida administración y destino.

- XVII.** Con fecha de 31 de julio de 2018, se hizo del conocimiento del Instituto Nacional Electoral, el oficio CEEPC/PRE/SE/3526/2018, signado por la Mtra. Laura Elena Fonseca Lara y el Lic. Héctor Avilés Fernández, Consejera Presidenta y Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis, respectivamente, con el que remiten el ACUERDO DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE ORDENA LA SUSPENSIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO AL PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO SOCIAL, POR NO HABER OBTENIDO, AL MENOS, EL TRES POR CIENTO DE LA VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA EN LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018.
- XVIII.** Mediante oficio NA/CDN/CEF/204/18 el Coordinador Ejecutivo Nacional de Finanzas del Partido Nueva Alianza solicitó un análisis jurídico respecto a los alcances de lo establecido en la Ley general de Partidos Políticos y el Reglamento de Fiscalización con el fin de atender la petición hecha por el

Interventor, toda vez que el artículo 385 numeral 1, del Reglamento de Fiscalización, establece claramente el periodo de prevención, en el que se encuentra Nueva Alianza, mientras que el artículo 386, fracción IV, señala que el Partido deberá cumplir con “Entregar de manera formal al Interventor, a través de Acta de Entrega Recepción, el patrimonio del Partido Político para fines de liquidación”.

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Nacional Electoral, que es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento.
2. Que de conformidad con el artículo 30, numeral 1, incisos a), b), d), f) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, son fines del Instituto Nacional Electoral, contribuir al desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática.
3. Que el artículo 41, Base II, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán adjudicados a la Federación.
4. Que en términos de lo establecido en el artículo 116, fracción IV, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el partido local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, le será cancelado el registro.

5. Que en términos de lo establecido en el artículo 116, fracción IV, inciso g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las bases establecidas en la Constitución, las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los Procesos Electorales. Del mismo modo se establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes.
6. Que el artículo 42, numerales 2 y 6 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, prevé la creación de la Comisión de Fiscalización, la cual funcionará permanentemente y se integrará exclusivamente por Consejeros Electorales designados por el Consejo General, y contará con un Secretario Técnico que será el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización.
7. Que el artículo 44, numeral 1, inciso m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que el Consejo General, dentro del ámbito de su competencia resolverá respecto de la pérdida del registro de los Partidos Políticos Nacionales que se encuadren en los supuestos previstos en la Ley General de Partidos Políticos, emitiendo como máximo órgano del Instituto, la declaratoria de pérdida de registro correspondiente, así como de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
8. Que el artículo 192, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que el Consejo General, ejercerá las facultades de revisión de los Acuerdos Generales, y, normas técnicas que se requieran para regular el registro contable de los partidos políticos.
9. Que el artículo 192, numeral 1, inciso j) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que la Comisión Fiscalización tendrá como facultad el resolver las consultas que realicen los partidos políticos.
10. Que el artículo 192, numeral 1, inciso ñ) del mismo ordenamiento, establece que, con el apoyo de la Unidad Técnica de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización llevará a cabo la liquidación de los partidos políticos que pierdan su registro e informará al Consejo General los parámetros, acciones y resultados de los trabajos realizados con tal fin.

11. Que el numeral 2 del citado artículo 192 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que, para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Fiscalización contará con la Unidad Técnica de Fiscalización.
12. Que en términos de lo señalado en el artículo 199, numeral 1, inciso i) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización junto con la Comisión de Fiscalización es responsable de los procedimientos de liquidación de los partidos políticos que pierdan su registro
13. Que el artículo 94 numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, señala las causales de pérdida de registro son:
 - a) No participar en un Proceso Electoral Ordinario;
 - b) No obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de Partidos Políticos Nacionales, y de Gobernador, diputados a las legislaturas locales y ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y los titulares de los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, tratándose de un partido político local;
 - c) No obtener por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias para Diputados, Senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de un Partido Político Nacional, o de Gobernador, diputados a las legislaturas locales y ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, tratándose de un partido político local, si participa coaligado;
 - d) Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro;
 - e) Incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto o de los Organismos Públicos Locales, según sea el caso, las obligaciones que le señala la normatividad electoral;

- f) Haber sido declarado disuelto por acuerdo de sus miembros conforme a lo que establezcan sus Estatutos, y
 - g) Haberse fusionado con otro partido político.
- 14.** Que el artículo 95, numeral 5 de la Ley General de Partidos Políticos, establece que si un Partido Político Nacional pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el último Proceso Electoral Ordinario Federal, podrá optar por el registro como partido político local en la o las entidades federativas en cuya elección inmediata anterior hubiere obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida y hubiere postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y Distritos, condición con la cual se le tendrá por cumplido y acreditado el requisito del número mínimo de militantes con que debe contar, establecido en el artículo 10, párrafo 2, inciso c), de la propia Ley.
- 15.** Que el artículo 97 de la Ley General de Partidos Políticos, prevé que de conformidad a lo dispuesto por el último párrafo de la Base II del artículo 41 de la Constitución, el Instituto dispondrá lo necesario para que sean adjudicados a la Federación los recursos y bienes remanentes de los Partidos Políticos Nacionales que pierdan su registro legal, que para tal efecto se estará a lo que disponga dicha ley y a las reglas de carácter general emitidas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
- 16.** Que los artículos 97 de la Ley General de Partidos Políticos y 381 del Reglamento de Fiscalización, establecen que si de los cómputos que realicen los Consejos Distritales del Instituto se desprende que un Partido Político Nacional no obtiene el porcentaje mínimo de votos establecido en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 94 de la señalada ley, la Comisión deberá designar de forma inmediata a un Interventor, quien será el responsable del patrimonio del partido político en liquidación.
- 17.** Que la fracción IV del inciso d), numeral 1, del artículo 97 de la Ley General de Partidos Políticos, señala que el Interventor designado deberá ordenar lo necesario para cubrir las obligaciones que la ley determina en protección y beneficio de los trabajadores del partido político en liquidación y realizado lo anterior, deberán cubrirse las obligaciones fiscales que correspondan, y si quedasen recursos disponibles, se atenderán otras obligaciones contraídas y debidamente documentadas con proveedores y

acreedores del partido político en liquidación, aplicando en lo conducente las leyes en la materia.

18. Que de conformidad con el artículo 382, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización el Interventor, para la liquidación del partido político, será designado por insaculación de la lista de especialistas en concursos mercantiles con jurisdicción nacional y registro vigente que el Instituto de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM) publique en Internet.
19. Que el artículo 384 del Reglamento de Fiscalización establece las responsabilidades del Interventor, entre las cuales se encuentra administrar el patrimonio del partido político en liquidación de la forma más eficiente posible, evitando cualquier menoscabo en su valor, tanto al momento de liquidarlo como durante el tiempo en que los bienes, derechos y obligaciones estén bajo su responsabilidad.
20. Que de conformidad con el artículo 385 numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización, se indica que el periodo de prevención, comprende a partir de que, de los cómputos que realicen los Consejos Distritales del Instituto se desprende que un partido político, no obtuvo el tres por ciento de la votación a que se refiere el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos y hasta que, en su caso, el Tribunal Electoral confirme la declaración de pérdida de registro emitida por la Junta General Ejecutiva.
21. Que el numeral 3 del artículo anterior, establece que, durante el periodo de prevención, el partido sólo podrá pagar gastos relacionados con nóminas e impuestos, por lo que deberá suspender cualquier pago a proveedores o prestadores de servicios, de igual forma serán nulos los contratos, compromisos, pedidos, adquisiciones u obligaciones celebradas, adquiridas o realizadas durante el periodo de prevención.
22. Que de conformidad con el artículo 386 numeral 1, inciso a), fracción IV del Reglamento de Fiscalización, los dirigentes, candidatos, administradores y representantes legales deberán entregar de manera formal al Interventor, a través de acta entregarecepcion, el patrimonio del partido político para fines de la liquidación describiendo a detalle los activos y pasivos existentes, así como las contingencias de las que se tenga conocimiento a la fecha de la misma.

23. Que el artículo 387 del Reglamento de Fiscalización, establece que el procedimiento de liquidación inicia formalmente cuando el Interventor emite el aviso de liquidación referido en el artículo 97 numeral 1, inciso d) fracción I de la Ley General de Partidos Políticos.
24. Que el artículo 388 del Reglamento de Fiscalización, numeral 3 señala que las cuentas bancarias que se aperturen por parte del Interventor en la etapa de liquidación, deberán ser abiertas a nombre del partido seguido de la denominación “En proceso de liquidación”.
25. Que el artículo 389 del Reglamento de Fiscalización establece que las prerrogativas públicas correspondientes al ejercicio fiscal en que ocurra la liquidación del partido, deberán ser entregadas por el Instituto al Interventor, a fin de que cuente con recursos suficientes para una liquidación ordenada. Asimismo, dispone que, para el caso de liquidación de partidos políticos con registro local, los Organismos Públicos Locales, deberán entregar al Interventor las prerrogativas correspondientes, incluyendo las correspondientes al mes de diciembre del ejercicio de que se trate.
26. Que una vez que causen estado las sanciones impuestas por los Organismos Públicos Locales se considerarán como créditos fiscales y como tales están sujetos al orden de prelación establecido en el artículo 97, numeral 1, inciso d), fracción IV de la Ley General de Partidos Políticos, dentro del procedimiento de liquidación.
27. Que la Constitución General, en su artículo 116, norma IV, inciso g), concede a los congresos locales de las entidades federativas la facultad para establecer disposiciones normativas específicas sobre “el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes”, por lo que la liquidación de partidos políticos con registro local corresponde a los Organismos Públicos Locales Electorales conforme a dichas normas.
28. Que la acción de inconstitucionalidad 14 del 2004 y sus acumulados 15 y 16 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece no se transgrede el artículo 41, fracción I de la Constitución Federal, al establecer que la facultad de las autoridades electorales locales, tratándose de Partidos

Políticos Nacionales es la de que en su caso, pueden suspender o cancelar la acreditación únicamente para participar en las elecciones estatales, y no así su registro como partido nacional, por virtud de que éste es expedido por la autoridad federal electoral, correspondiendo a ésta, en su caso, determinar sobre la cancelación, suspensión o permanencia del registro de los partidos nacionales.

- 29.** Que la acción de inconstitucionalidad 88/2008 y sus acumulados 90 y 91 relativa a la Legislación Electoral del estado de Jalisco, establece que el tercer párrafo y la fracción II del artículo 13 de la Constitución Local contravienen lo previsto en la fracción I del artículo 41 y el inciso g) de la fracción IV del artículo 116, ambos de la Constitución Federal, en tanto que regulan cuestiones de competencia exclusiva del ámbito federal y pretenden, a consecuencia de la denominada “pérdida de acreditación”, eliminar el beneficio consagrado a favor de los Partidos Políticos Nacionales de participar en la contienda política local y de contar con financiamiento público en las entidades federativas.
- 30.** Que en la acción de inconstitucionalidad 27 del 2009 y las acumuladas 29, 30 y 31, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que en nada transgrede lo dispuesto por los artículos 41, fracción II, inciso c), párrafo tercero y 116, fracción IV, inciso g) de la Constitución Federal, el que la pérdida de la acreditación estatal, traerá como consecuencia adicional y directa a la cancelación de los derechos y prerrogativas estatales, que la totalidad de los activos que el Partido Político Nacional haya adquirido a través de las prerrogativas estatales que le fueron otorgadas durante su acreditación, pasen a propiedad del Instituto Estatal Electoral.
- 31.** Que el artículo 24, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que en ningún caso podrá participar en elecciones ordinarias o extraordinarias el partido político que hubiere perdido su registro.
- 32.** Que el artículo 383, numeral 3, del Reglamento de Fiscalización, señala que, durante el periodo de prevención, cuando aún no se notifique la

pérdida de registro del partido político de que se trate, la remuneración o pago de honorarios del Interventor, serán cubiertos por el Instituto.

33. Que en materia fiscal, el artículo 150 del Código Fiscal de la Federación, en su cuarto párrafo, considera a los honorarios de los Interventores como gastos de ejecución y por tanto forman parte del adeudo que debe ser pagado por la empresa intervenida, y que, en materia concursal el artículo 333, párrafo I de la Ley de Concursos Mercantiles, señala que estos serán considerados como gastos de operación ordinaria del Comerciante, por lo que, al equipararse al supuesto establecido en el artículo 75, no se deberá interrumpir su pago por quien tenga la administración, sin importar la etapa en que se encuentre el procedimiento concursal. Es decir, en ambos casos los honorarios de los Interventores deben ser pagados por la persona moral que se encuentra intervenida.
34. Que la labor desempeñada por los Interventores es fundamental para que el partido político que perdió su registro, pueda liquidarse ordenadamente, y, que, en ese sentido existe un antecedente relativo a los concursos mercantiles, en el que el propio legislador como parte de la exposición de motivos que dio lugar a la reforma del 27 de diciembre de 2017 de los artículos 224, 225 y 333 de la Ley de Concursos Mercantiles, estimó conveniente considerar que el pago de los honorarios y gastos generados respecto a los especialistas debían tener el mismo trato que los pagos indispensables para la operación ordinaria de la empresa, de manera que su pago no debería verse interrumpido y menos aún, esperar la conclusión del concurso mercantil para ver remunerado su trabajo.
35. Que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en sus artículos 187, 188 y 189; así como el artículo 26 de la Ley General de Partidos Políticos, refieren el derecho de los Partidos Políticos Nacionales a las prerrogativas de franquicia postal y telegráfica. En los mismos artículos se señala que si a la conclusión del ejercicio fiscal que corresponda quedaren remanentes por este concepto, los mismos serán reintegrados a la Tesorería de la Federación como economías presupuestarias. Por tal motivo, se considera viable que dichos recursos, al estar presupuestados originalmente para los Partidos Políticos Nacionales, puedan ser utilizados

para cubrir los honorarios del Interventor que lleve a cabo la liquidación de aquéllos que hubieren perdido el registro ante este Instituto;

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo previsto en los artículos 41, Base V, Apartados A, párrafos primero y segundo y B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, numeral 1, inciso m); 190, numeral 2; 192, numerales 1, incisos a), j) y ñ), y 2; 196, numeral 1; y 199, numeral 1, incisos c) e i) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 95; 96 y 97 de la Ley General de Partidos Políticos; así como 384, numeral 1, inciso e); 385, numerales 1 y 2; 386, numeral 1, inciso a), fracción IV; y 388, numerales 1 y 3 del Reglamento de Fiscalización, se ha determinado emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se abroga el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral CG100/2016, emitido en acatamiento a la sentencia SUP-RAP-764/2015 y acumulados, relacionado con el procedimiento de liquidación de los Partidos Políticos Nacionales que no obtuvieron el porcentaje mínimo de la votación establecido en la ley para conservar su registro.

SEGUNDO. Se emiten las REGLAS GENERALES APLICABLES AL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES QUE NO OBTUVIERON EL PORCENTAJE MÍNIMO DE LA VOTACIÓN ESTABLECIDO EN LA LEY PARA CONSERVAR SU REGISTRO.

I. Alcance y Atribuciones

Artículo 1. El Interventor tendrá derecho a una remuneración o pago de honorarios por su labor, la cual será determinada por la Secretaría Ejecutiva con el apoyo de la Unidad Técnica de Fiscalización y la Dirección Ejecutiva de Administración, y podrá ser cubierta con el patrimonio del partido político de que se trate.

Cuando del primer informe mensual del Interventor designado se desprenda que el patrimonio del partido político presenta un saldo deficitario o sea insuficiente para cubrir los honorarios del Interventor, estos serán cubiertos de la siguiente manera:

Con cargo a las economías presupuestarias provenientes de las prerrogativas a que tienen derecho los Partidos Políticos Nacionales, previstas en los artículos 187, 188 y 189 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En caso de insuficiencia de los recursos mencionados en el párrafo anterior, con cargo al presupuesto que, para tal efecto, apruebe el Instituto Nacional Electoral. Lo mismo sucederá, cuando de los informes subsecuentes se advierta que el patrimonio del partido político se hubiere agotado.

A efecto de cumplir con lo dispuesto en el párrafo anterior, el Instituto incluirá en el proyecto de presupuesto correspondiente, una partida que cubra el pago de los servicios profesionales de al menos dos Interventores.

Artículo 2. El Instituto Nacional Electoral será el encargado de interpretar y aplicar las normas relacionadas con la liquidación de los partidos políticos que no obtuvieron el porcentaje mínimo de la votación establecido en la Ley para conservar su registro en el ámbito federal, con implicaciones a nivel local, en los siguientes supuestos:

1. Partidos políticos con registro nacional que no obtuvieron el 3% de la votación a nivel federal, pero sí superaron el porcentaje requerido a nivel local;
2. Partidos políticos con registro nacional que no obtuvieron el 3% a nivel federal ni tampoco obtuvieron el requerido a nivel local; y
3. Partidos políticos con registro nacional que aun cuando no obtuvieron el 3% a nivel federal, tienen derecho a participar en el próximo Proceso Electoral Local.

En todos los casos previstos, el Interventor designado por la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral será quien lleve a cabo el proceso de liquidación de los Partidos Políticos, incluyendo en él, tanto los recursos federales como los locales de todas las entidades federativas, sin perjuicio de observar lo dispuesto por el artículo 5 del presente Acuerdo.

Artículo 3. Los Partidos Políticos Nacionales que sí obtuvieron el 3% a nivel federal pero no obtuvieron el requerido a nivel local y por lo tanto únicamente pierdan su acreditación local, no serán objeto de liquidación, ya que este procedimiento implica la extinción de la figura jurídica y por lo tanto es atribución exclusiva del Instituto Nacional Electoral de conformidad con los artículos 96 y 97 de la Ley General de Partidos Políticos:

a). Los Organismos Públicos Locales tienen la facultad para interpretar y aplicar las normas referentes a la integración de remanentes económicos y los bienes muebles o inmuebles que hayan adquirido con financiamiento estatal, cuando los Partidos Políticos Nacionales no alcancen el 3% de la votación en las elecciones locales, y, por tanto, pierdan su acreditación a nivel local, sin que esa facultad deba ser reconocida por el Instituto Nacional Electoral para que pueda ejercerse.

b). Sin embargo, como el ejercicio de esa atribución puede implicar la realización de algunas actividades similares a la fiscalización, los Organismos Públicos Locales deberán coordinarse con el Instituto Nacional Electoral para tal efecto.

Artículo 4. Para los efectos del inciso b), del artículo anterior los Organismos Públicos Locales podrán solicitar al Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Fiscalización información respecto de los bienes que, conforme a lo reportado en el Sistema Integral de Fiscalización, se encuentren registrados en la contabilidad de cada entidad federativa.

Artículo 5. En los supuestos 1 y 3, del artículo 2 del presente Acuerdo, si el Partido Político Nacional subsistente en el ámbito local pretendiera constituirse como partido político con registro local, deberá observar los Lineamientos emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG939/2015, para el ejercicio del derecho que tienen los otrora Partidos Políticos Nacionales para optar por el registro como partido político local.

Para el efecto anterior, deberá solicitar su registro como partido local, dentro del plazo de 10 días contados a partir de que quede firme la declaratoria de perdida de registro emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Una vez presentado en tiempo, y, concluido exitosamente, el trámite de su registro como partido político local, constituyéndose como una persona moral distinta y con Registro Federal de Contribuyentes distinto al del partido en liquidación, tendrá a salvo sus derechos sobre los bienes y prerrogativas provenientes de recursos locales que, conforme a lo reportado en el Sistema Integral de Fiscalización, se encuentren registrados en la contabilidad de cada entidad federativa, al momento en que se haga la declaratoria de pérdida de registro del partido nacional, que aún sean parte de la administración que se encuentre llevando a cabo el Interventor.

El Interventor designado mantendrá en etapa de prevención los bienes mencionados en el párrafo anterior, hasta que el instituto político de que se trate, obtenga su registro como partido político local y puedan entregársele formalmente, o bien, hasta que haya fenecido el plazo para solicitarlo, en cuyo caso, los bienes en comento seguirán la misma suerte que el resto del patrimonio.

II. Sobre el Periodo de Prevención

Artículo 6. En el periodo de Prevención el Interventor será el responsable directo de vigilar y controlar el uso y destino que se le dé a los recursos y bienes tanto federales como locales, del partido de que se trate.

En esta etapa, las prerrogativas que le correspondan al partido político tanto en el ámbito federal como en el local, deberán depositarse en las mismas cuentas aperturadas y registradas para dicho efecto, excepto en el caso de que el Interventor justifique ante la UTF, la necesidad de abrir otra cuenta distinta a fin de proteger el patrimonio.

La apertura de una nueva cuenta por parte del Interventor, para el depósito de las prerrogativas, deberá ser aprobada por la Comisión de Fiscalización como medida preventiva necesaria para salvaguardar los recursos del partido político, en términos de lo dispuesto por el artículo 385 numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.

Artículo 7. Durante el periodo de prevención, el Partido Político deberá entregar formalmente al Interventor la información de los bienes que conforman el patrimonio del partido a través de un acta de Entrega-Recepción, sin que esto signifique que se encuentre en la etapa de liquidación.

Esta medida tiene por objeto que el Interventor, al ser responsable de evitar el menoscabo del patrimonio, tenga bajo control todos los activos, tal como lo señalan los artículos 381 y 386 numeral 1, inciso a) fracción IV, del Reglamento de Fiscalización, a fin de prevenir que se haga mal uso de ellos.

III. Sobre el periodo de liquidación

Artículo 8. Una vez iniciada la etapa de liquidación los recursos de financiamiento público federal, y local a los que aun tengan derecho a recibir los Partidos Políticos Nacionales deberán depositarse en las cuentas bancarias abiertas por el Interventor Liquidador en términos del artículo 388 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

Artículo 9. Todos los recursos que formen parte del patrimonio deberán destinarse al cumplimiento de las obligaciones que hubiere contraído el partido en liquidación en el orden de prelación que establece el artículo 395 del Reglamento de Fiscalización.

Artículo 10. Concluida la liquidación será el Interventor quien se encargue de determinar los recursos remanentes que existan tanto federales como locales, así como de identificar los bienes remanentes, a fin de proceder a reintegrarlos a la Tesorería de la Federación o a la de las entidades según corresponda.

IV. Temas generales

Artículo 11. El Interventor será responsable de vigilar y asegurarse que únicamente se realicen gastos indispensables para el sostenimiento del Partido Político y evitar que su patrimonio se llegue a dilapidar, a fin de salvaguardar los derechos de los trabajadores al entrar en la etapa de liquidación.

Artículo 12. En cuanto a las elecciones extraordinarias en las que los partidos políticos en proceso de liquidación tengan derecho a recibir financiamiento público, el Interventor junto con el responsable de finanzas del partido político, deberá abrir de manera inmediata una cuenta bancaria mancomunada con los requisitos establecidos en el artículo 54 del Reglamento de Fiscalización y el

Interventor será el responsable de los gastos que realicen en las campañas correspondientes.

Los gastos que podrá realizar el partido político serán los previstos en los artículos 243 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 76 de la Ley General de Partidos Políticos y 199 del Reglamento de Fiscalización, así como los previstos en las legislaciones locales que no se opongan a las federales, respetando el tope de gastos de campaña establecido para cada elección y el límite de financiamiento privado.

Todos los gastos deberán estar soportados con la documentación comprobatoria y con los requisitos fiscales que correspondan, así como los demás requisitos necesarios de conformidad al tipo de gasto, establecido en el Reglamento de Fiscalización.

Artículo 13. Las multas pendientes de pago no deberán descontarse de las ministraciones que le correspondan al partido político en liquidación de que se trate, sino que estas deberán considerarse en la lista de créditos.

Una vez que queden firmes las multas impuestas por los Organismos Públicos Locales deberán notificarse a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, y al Comité Ejecutivo Nacional de los partidos políticos correspondientes, a fin de que se incluyan en la relación de pasivos y el Interventor esté en posibilidad de incluirlas en la lista de prelación, conforme lo establece el numeral 1 del artículo 395 del Reglamento de Fiscalización.

Artículo 14. Durante el Periodo de Prevención el pago de honorarios del Interventor será cubierto por el Instituto Nacional Electoral.

Para la etapa de liquidación, dichos honorarios podrán ser cubiertos con cargo a las economías presupuestarias de las prerrogativas correspondientes a los conceptos de franquicias postales y/o telegráficas.

Cuando de los informes presentados por el Interventor, se desprenda que, no será posible cubrir los honorarios del Interventor con el patrimonio del partido, por tener un saldo deficitario al iniciar la prevención, o bien por haberse agotado durante el transcurso de la intervención, el Instituto Nacional Electoral, los cubrirá,

únicamente por el tiempo establecido en el contrato respectivo en términos de lo dispuesto por el artículo **16** del presente Acuerdo.

Artículo 15. Con el objetivo de estar en aptitud de cumplir con las facultades señaladas en el Reglamento de Fiscalización, específicamente en lo referente al artículo 391 numeral 3, el Interventor podrá solicitar al Responsable de Finanzas de los partidos de que se trate las cuentas de acceso al Sistema Integral de Fiscalización, con las cuales pueda efectuar la consulta de la información ahí contenida, dicho responsable tendrá la obligación de proporcionarla en un plazo que no exceda de tres días a partir de que reciba la solicitud por escrito. En el caso de que existiera una negativa por parte del Responsable de Finanzas del partido, el Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Fiscalización podrá, a solicitud expresa del Interventor proporcionar las cuentas de acceso respectivas.

Lo anterior sin perjuicio de las sanciones a las que pudiera hacerse acreedor tanto el partido como su Responsable de Fianzas que hubieren incurrido en la omisión citada en el párrafo anterior

Artículo 16. En todos los casos, los contratos que se celebren con los Interventores seleccionados, deberán sujetarse a lo siguiente:

- a) Su vigencia no deberá ser mayor a 1 año.
- b) Establecer que serán por la realización de todas las actividades del proceso de liquidación, con independencia del tiempo que lleve realizarlas.
- c) Los honorarios deberán pactarse por la realización de todas las actividades del proceso de liquidación, ya sea por toda la etapa de prevención, o bien por toda la etapa de liquidación o por ambas, con independencia de la duración de cada una de ellas
- d) En ningún caso se pagarán más honorarios, que los establecidos en el contrato por la realización de todas las actividades inherentes al proceso de liquidación, hasta su conclusión total, incluyendo, en su caso, la reintegración de remanentes a la Tesorería de la Federación o a la de las entidades federativas según corresponda.

Cuando exista causa justificada, a criterio de la Comisión de fiscalización, el plazo contemplado por el inciso a) del presente artículo, podrá prorrogarse por periodos

de un año cada vez, previó informe del Interventor en el que se justifique la necesidad de prorrogar la duración del contrato para concluir con la liquidación, sin que su aprobación implique en forma alguna que se le paguen más honorarios al Interventor, que los pactados en el contrato original.

Para fijar el monto mensual de los honorarios a los que se refiere el inciso c) anterior, la cantidad total que se haya pactado por la realización de todas las actividades hasta la conclusión de la liquidación deberá prorratearse entre el total de meses por los que se haya celebrado el contrato, y se pagarán mensualmente contra la presentación y aprobación del informe mensual correspondiente, y el comprobante fiscal respectivo, ante la Unidad Técnica de Fiscalización.

Si habiéndose pactado la vigencia del contrato para una duración mayor a la que le lleve al Interventor concluir con la liquidación, se tienen honorarios prorrateados, pendientes de cubrir, el Interventor podrá cobrarlos en su totalidad del patrimonio remanente, o, en su caso, solicitar el pago del saldo total de sus honorarios pendientes al Instituto Nacional Electoral, siempre que el informe final de la conclusión de la liquidación haya sido aprobado a satisfacción por el Consejo General del Instituto.

TERCERO. El presente Acuerdo es de aplicación general y observancia obligatoria para los Partidos Políticos Nacionales que pierdan su registro, así como para los Interventores designados en el periodo de prevención y liquidación de dichos partidos políticos.

CUARTO. Las prerrogativas de financiamiento público ordinario aprobado para el año en que transcurra la prevención se considerarán en su carácter anual, por lo cual, el financiamiento restante del presente año deberá seguirse depositando en la forma que se señala en el artículo 11 del presente Acuerdo.

QUINTO. Notifíquese a los Organismos Públicos Locales de las treinta y dos entidades federativas, a través de la Unidad Técnica de Vinculación.

SEXTO. El presente Acuerdo entra en vigor a partir de su aprobación.

SÉPTIMO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación, así como en la página del Instituto Nacional Electoral.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Le pido que realice las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo recién aprobado en el Diario Oficial de la Federación. _____

Del mismo modo, le pido Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente asunto del orden del día. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto es el relativo a los Proyectos de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a sentencias dictadas por la Sala Superior y Salas Regionales Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Toluca y Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de Fiscalización, mismo que se compone de 38 apartados. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Señoras y señores Consejeros y representantes, pregunto a ustedes si desean reservar para su discusión, algún apartado del presente punto del orden del día o, en su caso, abrir una ronda de discusión en lo general. _____

Tiene el uso de la palabra Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín. _____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente. _____

Quisiera reservar algunos apartados y pedir abrir una ronda en lo general para hacer precisiones en cuanto a algunos apartados que me parece que se pueden votar conjuntamente, solamente haciendo algunas reservas. _____

Reservaría los apartados 9.1, 9.3, 9.14, 9.22, a 9.35 y a 9.36. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: ¿Alguien desea reservar algún otro apartado? _____

De no ser el caso, y si no tienen ustedes inconveniente, sometería a consideración, primero, la solicitud de una ronda de discusión en lo general. _____

Después de ésta, pasaría a pedirle al Secretario del Consejo, que tome la votación de aquellos asuntos que no fueron reservados. _____

En tercer lugar, procedería con estos 6 asuntos reservados por la Consejera Electoral Pamela San Martín. _____

Secretario del Consejo, consulte si se realiza una ronda de discusión en lo general. ____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales, en votación económica se consulta si se aprueba abrir una ronda de discusión para exponer planteamientos en lo general. _____

Los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la mano, por favor. _____

Aprobada (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario del Consejo. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín. _____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente. _____

En la misma forma que lo señalé cuando discutimos el punto de los Procedimientos Ordinarios Sancionadores, hay varios temas que ya han sido ampliamente discutidos y que diferencias entre la postura mayoritaria del Consejo General y la que yo sostengo. Quisiera nada más hacer una precisión. En este caso estamos ante acatamientos, entonces, algunas diferencias que puedo tener en los Proyectos, más allá, por ejemplo, con los criterios de sanción que no comparto con las reducciones de ministraciones en las que se cobran las sanciones impuestas que no comparto, dado que estamos ante

un acatamiento, excepto en 2 casos muy particulares que son quejas nuevas realmente, y el acatamiento es para que la resolvamos, acompañaré el sentido del Proyecto de Acuerdo precisamente porque no hubo un pronunciamiento de la Sala Superior, o de alguna de las Salas Regionales, en un sentido diverso al aprobado por este Consejo General. _____

Sin embargo, derivado de que se nos señala que nos pronunciamos en distintas cuestiones, sí pediría un conjunto de votaciones en lo particular en algunos asuntos, porque si bien se está acatando como tal la Resolución, hay temas que no comparto en cuanto a los términos. _____

En primer lugar, reservaría algunos asuntos por una discusión que tuvimos la semana pasada, que tiene que ver con cómo acatar los temas relacionados con los casos en el que el Tribunal Electoral nos pide que digamos el estatus de la fiscalización de candidatos específicos, o candidatas específicas, en las que solamente se están separando las conclusiones que se dieron por no atendidas, y me parece que eso no coloca a los justiciables, en un adecuado ejercicio de sus derechos, por lo que se tendrían que desglosar no solo las no atendidas, también las conclusiones que en el Dictamen se dieron por atendida, esta fue una discusión de la semana pasada. _____

En ese sentido, pediría que se separaran de la votación los casos de los apartados 9.8, 9.9, 9.25 y 9.28. En estos me pronunciaría en contra en lo general, incluso, entonces, no requeriría una votación en lo particular. _____

Ahora, hay otro conjunto de casos en los que se está utilizando es una matriz de precios, qué es una matriz de precios que está depurada, si bien, el Tribunal Electoral nos ordena evaluar posibles gastos no reportados, lo hemos discutido, no comparto la forma en la que se elaboró la matriz de precios porque se eliminaron varios valores de esa matriz de precios, entonces pediría una votación en lo particular, sobre la matriz de precios en relación los apartados 9.2, 9.10, 9.13, 9.16 y el 9.33. _____

Por otra parte, en los asuntos que ya reservé, se atenderá un tema, pero sólo hay un asunto que tiene esto como Punto Único de materia de reserva, que es el 9.38, pediría una votación en lo particular por lo que hace a la forma en la que se hace la valoración sobre los gastos que están reportados por estar en el Sistema Integral de Fiscalización, es decir, sin hacer un cruce respecto de que el gasto específico sea el que corresponda a esa póliza, sino el concepto es el que tiene un empate con el concepto que está siendo denunciado, me parece que esto no nos permite identificar el gasto concreto y por lo tanto, tendría que revisarse de una forma distinta, entonces, pediría votaciones en lo particular en estos casos, adicionales a los apartados que ya he reservado. _____

Es cuanto, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín. _____

Al no haber más intervenciones. _____

Secretario del Consejo, tome la votación que corresponde a los asuntos que no fueron reservados por la Consejera Electoral Pamela San Martín. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con mucho gusto, Consejero Presidente. _____

Someteré a su consideración con lo que ha propuesto la Consejera Electoral Pamela San Martín, aquellos apartados en los que no hay ninguna discusión, que según mis notas serían los siguientes: el 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.11, 9.15, 9.17, 9.19, 9.20, 9.23, 9.24, 9.26, 9.27, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.32, 9.34 y el 9.37. _____

Repito, los que pidieron una votación en lo general. _____

Los casos en lo particular de 9.8, 9.9, 9.25, 9.28, los separaría porque habría una votación en lo general, pero la Consejera Electoral Pamela San Martín iría en un sentido negativo a como viene el Proyecto de Acuerdo. _____

Entonces, esos los voy a someter ese bloque en lo particular. _____

El resto, es decir, lo sometería a la consideración en lo general. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Hay una moción de la Consejera Electoral Pamela San Martín._____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Me parece que se pueden incorporar en esa lista los apartados 9.12, 9.18 y 9.21 que no vi que señalara._____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Bien, entonces, señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban los Proyectos de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificados en el orden del día como los apartados: 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.11, 9.12, 9.15, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.23, 9.24, 9.26, 9.27, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.34 y 9.37, tomando en cuenta las fe de erratas de los apartados 9.12, 9.29, 9.31, y las adendas de los apartados 9.15, 9.18 y 9.34._____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo si son tan amables._____

Aprobados por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente._____

(Texto de los Acuerdos aprobados INE/CG1261/2018, INE/CG1262/2018, INE/CG1263/2018, INE/CG1264/2018, INE/CG1265/2018, INE/CG1266/2018, INE/CG1267/2018, INE/CG1268/2018, INE/CG1269/2018, INE/CG1270/2018, INE/CG1271/2018, INE/CG1272/2018, INE/CG1273/2018, INE/CG1274/2018, INE/CG1275/2018, INE/CG1276/2018, INE/CG1277/2018, INE/CG1278/2018, INE/CG1279/2018, INE/CG1280/2018, INE/CG1281/2018 e INE/CG1282/2018) Ptos. 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.11, 9.12, 9.15, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.23, 9.24, 9.26, 9.27, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.34 y 9.37_____

INE/CG1261/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SCM-RAP-62/2018

ANTECEDENTES

I. En sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen Consolidado **INE/CG1134/2018** y la Resolución **INE/CG1135/2018** respecto de las irregularidades encontradas de la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017- 2018, en el Estado de Morelos (Partidos Políticos y Candidatos Independientes).

II. Recurso de apelación. Inconforme con lo anterior, el diez de agosto del dos mil dieciocho, el Partido Encuentro Social interpuso recurso de apelación para controvertir el Dictamen Consolidado **INE/CG1134/2018** y la Resolución **INE/CG1135/2018**.

III. Turno y radicación. Recibidas las constancias respectivas, por acuerdo del quince de agosto del dos mil dieciocho, el Magistrado Presidente de la Sala Regional correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de México¹, ordenó integrar el expediente **SCM-RAP-62/2018** y turnarlo a la Ponencia a su cargo, siendo radicado en la misma fecha.

IV. Acuerdo Plenario e Instrucción. El diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, la Sala Ciudad de México determinó realizar diversas gestiones con el objeto de integrar debidamente el recurso de apelación de mérito, por ello, en la misma fecha y a efecto de contar con mayores elementos para resolver, se requirió a la Unidad Técnica de Fiscalización para que remitiera la información que le fue solicitada.

¹ En lo sucesivo, Sala Ciudad de México.

El veinte de agosto del dos mil dieciocho, se realizó un nuevo requerimiento a la Autoridad Fiscalizadora para que remitiera la información que le fue solicitada, mismo que fue desahogado el veintiuno siguiente, fecha en la que el Magistrado Instructor recibió el oficio mediante el cual la Sala Superior remitió a la Sala Ciudad de México el escrito original de demanda y con esa misma fecha fue admitida.

V. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, en sesión pública celebrada el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, la Sala Ciudad de México resolvió el recurso referido, determinando lo que a la letra se transcribe:

“ (...)

RESUELVE

ÚNICO. Se **revoca** la resolución impugnada para los efectos precisados en esta sentencia.
(...)”.

Derivado de lo anterior, la ejecutoria recaída al recurso de apelación SCM-RAP-62/2018 tuvo por efectos **revocar la Resolución INE/CG1135/2018, únicamente respecto a la conclusión 9_C1_P1**, para que se emita una nueva en la que determine si con base en el convenio de candidatura común, correspondía o no al Partido Encuentro Social el reportar los gastos e información que fue materia de observación y por la cual se le pretende sancionar y, en su caso, valore la información que obre en el Sistema Integral de Fiscalización tanto del Partido Encuentro Social, como de MORENA, por lo que con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables, en consecuencia la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de mérito.

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j); 190,

numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los Partidos Políticos Nacionales y Partidos Políticos Locales, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis.

2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso del Recurso de Apelación identificado como **SCM-RAP-62/2018**.

3. Que el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, la Sala Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar el Dictamen Consolidado INE/CG1134/2018 y la Resolución INE/CG1135/2018 dictados por este Consejo General, respecto a la **conclusión 9_C1_P1**, por lo que se procede a la modificación de dichos documentos, para los efectos precisados en el presente Acuerdo, observando a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria.

4. Que en la sección relativa al estudio de agravios y a los efectos, dentro de los Considerandos **CUARTO Y QUINTO**, el órgano jurisdiccional señaló que:

“(…)

CUARTO. Estudio de agravios.

Previo al análisis de los argumentos aducidos por el actor, se precisa que en el recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, párrafo 1, de la Ley de Medios, se debe suplir la deficiencia en la expresión de los conceptos de agravio, siempre y cuando éstos puedan ser deducidos claramente de los hechos narrados; consecuentemente, la regla de la suplencia se aplicará en esta sentencia.

Asimismo, se advierte que los motivos de disenso serán estudiados de manera conjunta, lo que no genera perjuicio al recurrente, en términos de lo dispuesto en el criterio contenido en la jurisprudencia 4/2000, de rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”.²

² Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, jurisprudencia, volumen I, página 125.

Al efecto, en el escrito de demanda se precisa que la resolución impugnada carece de congruencia y exhaustividad pues la autoridad responsable no valoró lo expuesto por el PES mediante documento suscrito por el ciudadano Manuel I. Urzúa Martínez, en su calidad de Coordinador de Administración y Finanzas a propósito de las observaciones formuladas en el oficio INE/UTF/DA/36700/18.

En ese tenor, el Partido señala que la autoridad responsable no consideró que en ese escrito hizo de su conocimiento lo siguiente:

— Que los eventos catalogados como “onerosos” solo habían sido reportados así de manera informativa, pues el PES no contribuyó con erogación alguna a propósito de los mismos.

— Que los gastos habían sido absorbidos por MORENA, según las pólizas que fueron exhibidas en el “Anexo 1”.

— Que de conformidad con el Convenio de candidatura común celebrado entre el PES, MORENA y el Partido del Trabajo, se acordó que la procedencia de la candidata al VIII Distrito sería de MORENA, siendo por ello que el PES únicamente registró la agenda de la candidata Elsa Delia González Solórzano —candidata común a diputada por mayoría relativa en ese Distrito— de manera informativa, pues MORENA reportó a la UTF, a través del SIF los gastos correspondientes.

Calificación del agravio.

Ante todo, se destaca que los motivos de inconformidad en todo momento se concretan al caso particular de la agenda de la candidata Elsa Delia González Solórzano y no en relación a la agenda de otras personas, respecto de las cuales no se endereza agravio alguno —caso del candidato a diputado local por Mayoría Relativa Andrés Duque Tinoco y de la candidata a Presidenta Municipal Jeovanna Lima Flores—.

*Como se puede apreciar, la causa de pedir del actor en este punto de inconformidad, se hizo consistir en que fue sancionado sin que la responsable, ni la UTF tuvieran por acreditado que, en efecto, los gastos relacionados con las actividades reportadas por la candidata **Elsa Delia González Solórzano, en efecto, hubiera sido obligación del PES y no de MORENA, lo que en su momento hizo valer** su escrito de trece de julio, sin que tal circunstancia hubiera sido analizada.*

*Para esta Sala Regional los motivos de inconformidad aducidos por el recurrente son **fundados**, como se explica a continuación.*

- **Escrito de errores y omisiones.**

En relación con esta irregularidad, en el oficio número INE/UTF/DA/36700/18³, la UTF asentó:

‘El sujeto obligado presentó la agenda de eventos de campaña, de la revisión efectuada se localizó un evento reportado como “Oneroso”; sin embargo, en el SIF no se registraron gastos de dichos eventos. Lo anterior se detalla a continuación:

Con.	Cargo	Candidato	Núm. Identificador	Lugar del Evento	Fecha Del Evento	Evento	Tipo De Evento
1	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	1	Campo Deportivo, Ubicado En La Misma Colonia	14/05/2018	Oneroso	Público
2	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	2	La Comunidad 2 El Estudiante	15/05/2018	Oneroso	Público
3	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	3	Auditorio De Actividades Múltiples	16/05/2018	Oneroso	Público
4	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	4	Cancha De Usos Múltiples	17/05/2018	Oneroso	Público
5	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	5	Cancha De Usos Múltiples	18/05/2018	Oneroso	Público
6	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	6	Calle 20 De Noviembre	19/05/2018	Oneroso	Público
7	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	7	Tianguis De Chinconcuac	20/05/2018	Oneroso	Público
8	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	8	Alpuyeca Mor	21/05/2018	Oneroso	Público
9	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	9	Primaria José María Morelos	22/05/2018	Oneroso	Público
10	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	10	Calle Girasoles Sin Numero	23/05/2018	Oneroso	Público
11	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	11	Cerca De La Casa De Cultura De Atlacholaya	24/05/2018	Oneroso	Público
12	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	12	Zócalo Del Mpio De Jiutepec Morelos	25/05/2018	Oneroso	Público

³ Del diez de julio del dos mil dieciocho, visible en formato electrónico dentro del disco compacto rotulado con “Soporte Documental INE-ATG/564/2018, remitido por la autoridad responsable en alcance, mediante oficio INE/SCG/3052/2018, del dieciséis de agosto del año en curso.

Con.	Cargo	Candidato	Núm. Identificador	Lugar del Evento	Fecha Del Evento	Evento	Tipo De Evento
13	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	13	Arcos De Chiconcuah (Por La Calles: Av. Independencia, Calle Hidalgo, No Reelección, Libertad, Constitución, José María Morelos Y Pavón, Reforma Y Calzada De Los Pinos). (Mpio. Xochitepec).	26/05/2018	Oneroso	Público
14	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	14	(Mpio. Emiliano Zapata)	26/05/2018	Oneroso	Público
15	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	15	Centro De Xochitepec. (Mpio. Xochitepec).	27/05/2018	Oneroso	Público
16	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	16	Calle Del Maiz	27/05/2018	Oneroso	Público
17	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	17	Col. De La Cruz, Hacia Col. San Miguel La Unión	28/05/2018	Oneroso	Público
18	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	18	Calle Pino Suarez, Entre Calle Jardines Y Calle Juan Sarabia	28/05/2018	Oneroso	Público
19	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	19	Parque Tetecalita	29/05/2018	Oneroso	Público
20	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	20	Mercado Mpal. De Emiliano Zapata	30/05/2018	Oneroso	Público
21	Diputado Local Mr	Andrés Duque Tinoco	1	Plaza Cívica	16/05/2018	Oneroso	Público
22	Presidente Municipal	Jeovanna Lima Flores	1	Plaza Gustavo Baz	16/05/2018	Oneroso	Público
23	Presidente Municipal	Jeovanna Lima Flores	16	Plaza Gustavo Baz	03/06/2018	Oneroso	Público

Se solicita presentar en el SIF, lo siguiente:

- **En caso de haber realizado algún gasto:**
 - El o los comprobantes y archivos XML que amparen los gastos efectuados con todos los requisitos establecidos en la normativa.
 - Las evidencias del pago y, en caso de que éstos hubiesen excedido el tope de 90 UMA, las copias de los cheques correspondientes con la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”.
 - El o los contratos de arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de servicios, debidamente requisitados y firmados.
 - El o los avisos de contratación respectivos.
- **En caso de corresponder a una aportación en especie:**

- *El o los recibos de aportación con los requisitos establecidos en la normativa.*
- *El o los contratos de donación, debidamente requisitados y firmados.*
- *El control de folios que establece el RF.*
- *Dos cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por cada aportación realizada.*
- *Evidencia de la credencial para votar de los aportantes.*
- *En todos los casos:*
 - *El registro del ingreso y gasto en su contabilidad, indicando por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro al que hace referencia el artículo 143 Bis de RF.*
 - *El o los informes de campaña con las correcciones.*
 - *Evidencia fotográfica de la propaganda observada.*
 - *Las aclaraciones que a su derecho convengan.*

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i), 54, numeral 1, 55, numeral 1, 56, numerales 3, 4 y 5, 61, numeral 1, inciso f), fracción III, 63, 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la LGPP; 26, numeral 1, inciso a), 33, numeral 1, inciso i), 37, 38, 46, numeral 1, 47, numeral 1, inciso a), 74, 96, numeral 1, 105, 106, 107, numerales 1 y 3, 126, 127, 143 Bis, 237, 243 y 245, del RF.'

- ***Respuesta del PES.***

En respuesta a tal observación, mediante escrito del trece de julio del año en curso, el Coordinador de Administración y Finanzas del PES en Morelos manifestó lo siguiente:

“Como ustedes mismos lo constatan, los candidatos; Elsa Elia González Solórzano, Andrés Duque Tinoco y Jeovana Lima Flores, son candidatos por la candidatura común de los partidos Morena, PT y PES.

Este partido “Encuentro Social”, registro agenda del candidato como dato informativo, durante el periodo de duración del proceso de campaña no se le contribuyó con algún gasto extraordinario, salvo los gastos por concepto de bardas, lonas y playeras que se efectuaron por medio de prorratesos registrados en las contabilidades correspondientes.

La candidata a Diputado Local por el Distrito XIII, reporto gastos que fueron absorbidos por el partido Morena según registro de pólizas, la evidencia de las pólizas con los registros contables se encuentra en el Anexo 1 de la presente observación.”

De lo apuntado, se desprende que toda la explicación ofrecida por el recurrente giró en torno a que MORENA había reportado los gastos respectivos, lo que, según lo manifestado por el PES, se corroboraba en términos de la información contenida en el Anexo 1 de la observación.

En ese tenor, la UTF concluyó que de la revisión al SIF a las pólizas de corrección, así como a la documentación adjunta al informe, y del análisis a la respuesta del sujeto obligado se verificó que aun y cuando manifestó que se registró la agenda de eventos como dato informativo, se corroboró que no realizó el registro del gasto en su contabilidad como se detalló en el Anexo 1_P1 del Dictamen.

Ahora bien, como lo sostiene el recurrente, en la resolución controvertida si bien se hizo alusión al escrito de trece de julio, suscrito a propósito de las observaciones formuladas a través del oficio INE/UTF/DA/36700/18, pues al efecto en dicha resolución impugnada se señaló lo siguiente:

‘...mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, a partir del momento de la notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad detectada.

Consecuente con lo anterior los sujetos obligados no obstante que presentaron un escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones, de su contenido no se advirtió presentara documentación o evidencia relativa a las observaciones en comento.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido, mediante requerimiento al instituto político correspondiente, con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito y así, salvaguardar la garantía de audiencia y que los candidatos contaran con la oportunidad de preparar una adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

*Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de las sanciones correspondientes, determinar la **responsabilidad de los sujetos obligados** en las consecuencias de las conductas materia de análisis.*

Lo cierto es que la observación no se tuvo por satisfecha a pesar de que el PES manifestó que la obligación de reportar dichos eventos le correspondía a MORENA.

Sin embargo, tal circunstancia fue soslayada por la autoridad responsable, quien determinó la responsabilidad del recurrente sobre la base de que de la revisión de sus pólizas de corrección en el SIF, así como de la documentación adjunta al informe y del análisis a la respuesta del sujeto obligado se constató que aun y cuando manifestó que se registró la agenda de eventos como dato informativo, se verificó que no realizó el registro del gasto en su contabilidad como se detalló en el Anexo 1_P1 del Dictamen.

*Por otro lado, lo **fundado** de los motivos de disenso radica en que como lo aduce el PES, antes de imputarle el incumplimiento de las reglas de fiscalización, la autoridad responsable debió establecer a la luz del convenio de candidatura común respectivo si, en efecto, dicho partido político estaba obligado a reportar los gastos de campaña relacionados con las candidaturas precisadas en el escrito de errores y omisiones o, en realidad se trataba de una obligación que correspondía proporcionar a MORENA.*

Lo que resultaba necesario verificar a efecto de determinar la existencia de alguna infracción a cargo del PES.

En otras palabras, la autoridad responsable soslayó que en el escrito del trece de julio el PES se desvinculó de la comisión de la infracción que se le imputó al referir que los datos que se le pedían eran propios de MORENA; sin embargo, tal circunstancia no fue estudiada por la autoridad responsable, como tampoco lo fue la documentación soporte que adjuntó al escrito de referencia relacionada con la información subida al SIF, misma que fue remitida por la UTF en desahogo del requerimiento que le fue hecho por el Magistrado Instructor.⁴

QUINTO. Efectos.

*En virtud de que esta Sala Regional consideró **fundados los motivos de disenso** expuestos por el recurrente, se ordena a la autoridad responsable emita una nueva resolución en la que determine si con base en el convenio de candidatura común, correspondía o no al PES reportar los gastos e información que fue materia de observación y por la cual se le pretende sancionar y, en su*

⁴ Documentación que se fue remitida por la UTF mediante oficio INE/UTF/DA/42473/18 en desahogo del requerimiento que le fue realizado y que consta en formato electrónico, visible en el interior del sobre rotulado con número de folio 77 del expediente que se resuelve, en donde obra diversa documentación del PES que fue registrada en el SIF.

caso, valore la información que obre en el SIF tanto del PES, como de MORENA relacionadas con la materia de infracción.

(...)”.

5. Que de la lectura del **SCM-RAP-62/2018**, se desprende que en relación a la conclusión 9_C1_P1, la Sala Ciudad de México determinó declarar fundado el agravio vertido por el apelante, por lo que determinó revocar la sanción impuesta en la conclusión mencionada, para que se emita una nueva en la que se determine si con base en el convenio de candidatura común, corresponde o no al Partido Encuentro Social reportar los gastos e información que fue materia de observación y por la cual se le pretende sancionar y, en su caso, valore la información que obre en el SIF tanto del PES, como de MORENA, relacionadas con la materia de infracción.

6. Que para dar cumplimiento a la determinación de la Sala Ciudad de México en el **SCM-RAP-62/2018**, esta autoridad electoral procedió a acatar en los términos ordenados en la referida sentencia, de acuerdo con lo siguiente:

Sentencia	Efectos	Acatamiento
<p>Revocar parcialmente la Resolución INE/CG1135/2018, y la parte atinente al Dictamen Consolidado INE/CG1134/2018, según lo razonado en los Considerandos CUARTO y QUINTO de la sentencia SCM-RAP-62/2018.</p> <p>Respecto al aspecto materia de la revocación, la Sala Ciudad de México ordenó se emita una nueva en la que se determine si con base en el convenio de candidatura común, corresponde o no al Partido Encuentro Social reportar los gastos e información que fue materia de observación y por la cual se le pretende sancionar,</p>	<p>La autoridad responsable determine si con base en el convenio de candidatura común, corresponde o no al Partido Encuentro Social reportar los gastos e información que fue materia de observación y por la cual se pretende sancionar en la conclusión 9_C1_P1 y, en su caso, valore la información que obre en el SIF tanto del PES, como de MORENA, relacionadas con la materia de infracción.</p>	<p>En cumplimiento a la resolución recaída dentro del recurso de apelación SCM-RAP-62/2018, tanto en el Dictamen como en resolución se desarrolla un análisis de la normatividad aplicable, así como del convenio de candidatura común celebrado por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, con el fin de fundar y motivar si corresponde o no al Partido Encuentro Social reportar los gastos e información que fue materia de observación. Derivado de análisis realizado, se modifica la sanción aplicada en la resolución INE/CG1135/2018.</p>

7. La Sala Regional Ciudad de México determinó revocar el Dictamen Consolidado **INE/CG1134/2018**, respecto a la conclusión 9_C1_P1, para que se emita una nueva en la que se determine si con base en el convenio de candidatura común,

corresponde o no al Partido Encuentro Social reportar los gastos e información que fue materia de observación y por la cual se le pretende sancionar, por lo que este Consejo General procede a su modificación, en los siguientes términos:

DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE CAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017 – 2018 EN EL ESTADO DE MORELOS

**3.16 ES Morelos
(...)**

Conclusión 1

Agenda de Eventos

- ♦ *El sujeto obligado presentó la agenda de eventos de campaña, de la revisión efectuada se localizaron eventos reportado como “Oneroso”; sin embargo, en el SIF no se registraron gastos de dichos eventos como se detalla a continuación:*

Con.	Cargo	Candidato	Núm. Identificador	Lugar del Evento	Fecha Del Evento	Evento	Tipo De Evento
1	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	1	Campo Deportivo, Ubicado En La Misma Colonia	14/05/2018	Oneroso	Público
2	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	2	La Comunidad 2 El Estudiante	15/05/2018	Oneroso	Público
3	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	3	Auditorio De Actividades Múltiples	16/05/2018	Oneroso	Público
4	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	4	Cancha De Usos Múltiples	17/05/2018	Oneroso	Público
5	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	5	Cancha De Usos Múltiples	18/05/2018	Oneroso	Público
6	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	6	Calle 20 De Noviembre	19/05/2018	Oneroso	Público
7	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	7	Tianguis De Chinconcuac	20/05/2018	Oneroso	Público

Con.	Cargo	Candidato	Núm. Identificador	Lugar del Evento	Fecha Del Evento	Evento	Tipo De Evento
8	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	8	Alpuyeca Mor	21/05/2018	Oneroso	Público
9	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	9	Primaria José María Morelos	22/05/2018	Oneroso	Público
10	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	10	Calle Girasoles Sin Numero	23/05/2018	Oneroso	Público
11	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	11	Cerca De La Casa De Cultura De Atlacholoaya.	24/05/2018	Oneroso	Público
12	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	12	Zócalo Del Mpio De Jiutepec Morelos	25/05/2018	Oneroso	Público
13	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	13	Arcos De Chiconcuah (Por La Calles: Av. Independencia, Calle Hidalgo, No Reelección, Libertad, Constitución, José María Morelos Y Pavón, Reforma Y Calzada De Los Pinos). (Mpio. Xochitepec).	26/05/2018	Oneroso	Público
14	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	14	(Mpio. Emiliano Zapata).	26/05/2018	Oneroso	Público
15	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	15	Centro De Xochitepec. (Mpio. Xochitepec).	27/05/2018	Oneroso	Público
16	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	16	Calle Del Maiz	27/05/2018	Oneroso	Público
17	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	17	Col. De La Cruz, Hacia Col. San Miguel La Unión	28/05/2018	Oneroso	Público
18	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	18	Calle Pino Suarez, Entre Calle Jardines Y Calle Juan Sarabia	28/05/2018	Oneroso	Público
19	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	19	Parque Tetecalita	29/05/2018	Oneroso	Público
20	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	20	Mercado Mpal. De Emiliano Zapata	30/05/2018	Oneroso	Público
21	Diputado Local Mr	Andrés Duque Tinoco	1	Plaza Cívica	16/05/2018	Oneroso	Público
22	Presidente Municipal	Jeovanna Lima Flores	1	Plaza Gustavo Baz	16/05/2018	Oneroso	Público
23	Presidente Municipal	Jeovanna Lima Flores	16	Plaza Gustavo Baz	03/06/2018	Oneroso	Público

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la observación antes citada fue notificada mediante el oficio de errores y omisiones núm. INE/UTF/DA/36700/18, de fecha 10 de julio de 2018, en el módulo de notificaciones electrónicas del SIF, el mismo día.

Fecha de vencimiento del oficio de errores y omisiones: 15 de julio de 2018.

Con escrito de respuesta: sin número de fecha, 13 de julio de 2018, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Como ustedes mismos lo constatan, los candidatos; Elsa Elia González Solórzano, Andrés Duque Tinoco y Jeovana Lima Flores, son candidatos por la candidatura común de los partidos Morena, PT y PES.

Este partido “Encuentro Social”, registro agenda del candidato como dato informativo, durante el periodo de duración del proceso de campaña no se le contribuyó con algún gasto extraordinario, salvo los gastos por concepto de bardas, lonas y playeras que se efectuaron por medio de prorrateos registrados en las contabilidades correspondientes.

La candidata a Diputado Local por el Distrito XIII, reporto gastos que fueron absorbidos por el partido Morena según registro de pólizas, La evidencia de las pólizas con los registros contables se encuentra en el Anexo 1 de la presente observación”

No atendida

De la revisión al SIF, a las pólizas de corrección, a la documentación adjunta al informe y del análisis a la respuesta del sujeto obligado se verificó que aun y cuando manifestó que se registró la agenda de eventos como dato informativo, se verificó que no realizó el registro del gasto en su contabilidad como se detalla en el **Anexo 1_P1 del presente Dictamen.**

9_C1_P1

El sujeto obligado cambió el estatus del evento a “realizado-oneroso”, omitiendo registrar gastos por concepto de 23 eventos públicos, impidiendo a la autoridad realizar la verificación del mismo, tal situación constituye a juicio de la UTF, el incumplimiento en lo establecido en el artículo 143 bis del RF.

Acatamiento a la Sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de México (en adelante Sala Regional Ciudad de México), expediente SCM-RAP-62/2018.

El 23 de agosto de 2018, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el recurso de apelación identificado como SCM-RAP-62/2018 determinando revocar la Resolución INE/CG1135/2018, particularmente en lo tocante a la conclusión 9_C1_P1, emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de las y los candidatos a los cargos de Diputaciones y Ayuntamientos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en Morelos, en relación a Encuentro Social al estimarse que:

“

(...)

*lo **fundado** de los motivos de disenso radica en que como lo aduce el PES, antes de imputarle el incumplimiento de las reglas de fiscalización, la autoridad responsable debió establecer a la luz del convenio de candidatura común respectivo si, en efecto, dicho partido político estaba obligado a reportar los gastos de campaña relacionados con las candidaturas precisadas en el escrito de errores y omisiones o, en realidad se trataba de una obligación que correspondía proporcionar a MORENA”*

Y se ordena:

“(...

QUINTO. Efectos

*En virtud de que esta Sala Regional consideró **fundados los motivos de disenso** expuestos por el recurrente, se ordena a la autoridad responsable emita una nueva resolución en la que determine si con base en el convenio de candidatura común correspondía o no al PES reportar los gastos e información que fue materia de observación y por la cual se le pretende sancionar y, en su caso, valore la información que obre en el SIF tanto del PES, como de MORENA relacionadas con la materia de infracción.*

(...)”

Conclusión 1

Agenda de Eventos

- ♦ El sujeto obligado presentó la agenda de eventos de campaña, de la revisión efectuada se localizaron eventos reportado como “Oneroso”; sin embargo, en el SIF no se registraron gastos de dichos eventos como se detalla a continuación:

Con.	Cargo	Candidato	Núm. Identificador	Lugar del Evento	Fecha Del Evento	Evento	Tipo De Evento
1	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	1	Campo Deportivo, Ubicado En La Misma Colonia	14/05/2018	Oneroso	Público
2	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	2	La Comunidad 2 El Estudiante	15/05/2018	Oneroso	Público
3	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	3	Auditorio De Actividades Múltiples	16/05/2018	Oneroso	Público
4	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	4	Cancha De Usos Múltiples	17/05/2018	Oneroso	Público
5	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	5	Cancha De Usos Múltiples	18/05/2018	Oneroso	Público
6	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	6	Calle 20 De Noviembre	19/05/2018	Oneroso	Público
7	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	7	Tianguis De Chinconcuac	20/05/2018	Oneroso	Público
8	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	8	Alpuyeca Mor	21/05/2018	Oneroso	Público
9	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	9	Primaria José María Morelos	22/05/2018	Oneroso	Público
10	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	10	Calle Girasoles Sin Numero	23/05/2018	Oneroso	Público
11	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	11	Cerca De La Casa De Cultura De Atlacholoaya.	24/05/2018	Oneroso	Público
12	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	12	Zócalo Del Mpio De Jiutepec Morelos	25/05/2018	Oneroso	Público

Con.	Cargo	Candidato	Núm. Identificador	Lugar del Evento	Fecha Del Evento	Evento	Tipo De Evento
13	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	13	Arcos De Chiconcuah (Por La Calles: Av. Independencia, Calle Hidalgo, No Reelección, Libertad, Constitución, José María Morelos Y Pavón, Reforma Y Calzada De Los Pinos). (Mpio. Xochitepec).	26/05/2018	Oneroso	Público
14	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	14	(Mpio. Emiliano Zapata).	26/05/2018	Oneroso	Público
15	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	15	Centro De Xochitepec. (Mpio. Xochitepec).	27/05/2018	Oneroso	Público
16	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	16	Calle Del Maiz	27/05/2018	Oneroso	Público
17	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	17	Col. De La Cruz, Hacia Col. San Miguel La Unión	28/05/2018	Oneroso	Público
18	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	18	Calle Pino Suarez, Entre Calle Jardines Y Calle Juan Sarabia	28/05/2018	Oneroso	Público
19	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	19	Parque Tetecalita	29/05/2018	Oneroso	Público
20	Diputado Local Mr	Elsa Delia González Solórzano	20	Mercado Mpal. De Emiliano Zapata	30/05/2018	Oneroso	Público
21	Diputado Local Mr	Andrés Duque Tinoco	1	Plaza Cívica	16/05/2018	Oneroso	Público
22	Presidente Municipal	Jeovanna Lima Flores	1	Plaza Gustavo Baz	16/05/2018	Oneroso	Público
23	Presidente Municipal	Jeovanna Lima Flores	16	Plaza Gustavo Baz	03/06/2018	Oneroso	Público

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la observación antes citada fue notificada mediante el oficio de errores y omisiones núm. INE/UTF/DA/36700/18, de fecha 10 de julio de 2018, en el módulo de notificaciones electrónicas del SIF, el mismo día.

Fecha de vencimiento del oficio de errores y omisiones: 15 de julio de 2018.

Con escrito de respuesta: sin número de fecha, 13 de julio de 2018, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Como ustedes mismos lo constatan, los candidatos; Elsa Elia González Solórzano, Andrés Duque Tinoco y Jeovana Lima Flores, son candidatos por la candidatura común de los partidos Morena, PT y PES.

Este partido “Encuentro Social”, registro agenda del candidato como dato informativo, durante el periodo de duración del proceso de campaña no se le contribuyó con algún gasto extraordinario, salvo los gastos por concepto de bardas, lonas y playeras que se efectuaron por medio de prorratesos registrados en las contabilidades correspondientes.

La candidata a Diputado Local por el Distrito XIII, reporto gastos que fueron absorbidos por el partido Morena según registro de pólizas, La evidencia de las pólizas con los registros contables se encuentra en el Anexo 1 de la presente observación”

Respecto de la respuesta del Partido Encuentro Social, es pertinente realizar las siguientes consideraciones.

Establece el artículo 276, bis, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización lo siguiente:

“Artículo 276 Bis.

*1. **Se entiende por candidatura común** o alianza partidaria a la figura mediante la cual dos o más partidos políticos, sin mediar coalición, **pueden postular a un mismo candidato a un cargo de elección en el ámbito local.***

[el subrayado es nuestro]

Ahora bien, el doce de enero de dos mil dieciocho, los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social presentaron un escrito ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana, conforme al cual solicitaban el registro de un convenio de candidatura común integrado por los partidos antes mencionados.

Es el caso que mediante Acuerdo IMPEPAC/CEE/017/2018 de fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, el organismo local requirió a los institutos políticos con el fin de que subsanaran las observaciones hechas al convenio de candidatura común presentado. Mediante escrito de veintisiete de enero del mismo año, los partidos políticos dieron cumplimiento al requerimiento de la autoridad local, quien mediante Acuerdo IMPEPAC/CEE033/2018 de nueve de febrero del dos mil dieciocho, tuvo por cumplimentados los requerimientos realizados y por aprobado el registro del convenio de candidatura común firmado por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social.

En el convenio de candidatura común aprobado por el organismo local, los partidos de mérito, en la cláusula décima primera, acordaron lo siguiente:

“CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. Del monto de las aportaciones y reporte de los importes financieros para las campañas de la Candidatura Común.

(...)

*I. **LAS PARTES** reconocen que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos y en el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, **la Candidatura Común tendrá un Órgano de Finanzas**, el cual será el responsable de rendir, en tiempo y en forma, los informes parciales y final a través de los cuales se compruebe a la autoridad electoral los ingresos y los egresos de la Candidatura Común.*

*El órgano de finanzas de la Candidatura Común será el **Consejo de Administración** que estará integrado por un miembro designado por cada uno de los partidos integrantes de la Candidatura Común, cuyas decisiones serán tomadas de conformidad con lo siguiente votación ponderada:*

DEL TRABAJO 20%

ENCUENTRO SOCIAL 20%

MORENA: 60%

No obstante, cada Partido Político es responsable de la comprobación de gastos en el porcentaje que finalmente aporten.

El Consejo de Administración de la Candidatura Común contará con las facultades necesarias para desempeñar sus funciones, de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el presente Convenio de Candidatura Común y demás disposiciones legales y administrativas aplicables.

*El **Consejo de Administración** tendrá a su cargo la gestión de los recursos de la Candidatura Común, provenientes de cualquiera de las modalidades legalmente previstas como fuentes de financiamiento, y la obligación de satisfacer los requisitos legales y reglamentarios para su comprobación, además de presentar los informes y reportes necesarios al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de los gastos de campaña ejercidos por la misma, conforme a las fechas y formas establecidas en la normatividad aplicable.*

Cada Partido Político será responsable, en lo individual, de comprobar las aportaciones en efectivo de sus militantes y simpatizantes, de acuerdo con la normatividad prevista para tal efecto, así como de responder en forma individual por las faltas que, en su caso, incurra alguno de los Partidos Políticos suscriptores, sus militantes o candidatos, asumiendo la sanción correspondiente.

Los Partidos Políticos integrantes del presente convenio de Candidatura Común y sus candidatos se comprometen a observar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de fiscalización, en las que destacan que todos los gastos de campaña de la Candidatura Común sean pagados a través de las cuentas de la misma, así como para presentar ante la autoridad electoral un solo informe de gastos como Candidatura Común.

De presentarse el supuesto de que no se observe puntualmente la presente disposición, cada Partido Político, de forma individual, responderá por las sanciones que imponga la autoridad electoral fiscalizadora.

(...)

2. LAS PARTES *facultan al **Consejo de Administración** para que reciba las ministraciones que aporten los partidos de la Candidatura Común. Los cuales se comprometen a aportar dentro de un plazo máximo de 48 horas siguientes a la entrega de las ministraciones que realice el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana el porcentaje comprometido en esta cláusula, para destinarse al desarrollo de las campañas de los candidatos postulados por la Candidatura Común. En el supuesto de no disponer de ella, el **Consejo de Administración** podrá cobrar los recursos que no hayan sido entregados, en las subsecuentes prerrogativas partidarias hasta completar el faltante, independientemente de que la Candidatura Común termine sus efectos.*

*Adicionalmente a la prerrogativa que por financiamiento público reciba la Candidatura Común de las candidatas y los candidatos a Diputados Locales y miembros de un Ayuntamiento en el Estado de **Morelos**, los partidos políticos podrán realizar aportaciones en efectivo o en especie en los términos que establece la Ley y el Reglamento de Fiscalización*

a) Los recursos aportados por los Partidos Políticos participantes, así como los que por financiamiento público se señalan en la presente cláusula deberán ser presentados en los informes de campaña en los términos de la propia ley de la materia.

b) El uso y control de los recursos de la Candidatura Común deberá apegarse a los Lineamientos. Formatos e Instructivos Aplicables por el Instituto Nacional Electoral

*c) Los informes de campaña de los candidatos de la Candidatura Común serán presentados por el **Consejo de Administración**, por conducto de sus integrantes, en los términos que exige la Normatividad en la Materia.*

3. Deberá presentarse un informe por cada una de las campañas de elección en que haya participado la Candidatura Común, especificando los gastos que la Candidatura Común y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, así como el origen de los recursos que se hayan utilizado para financiar la campaña. En consecuencia, deberá presentarse:

*a) Los candidatos de la Candidatura Común y los partidos que los propusieron tendrán la obligación de proporcionar al **Consejo de Administración** las relaciones de ingresos obtenidos y gastos realizados en las campañas, así como de recabar los soportes documentales y muestras correspondientes y remitirlos a dicho órgano, de manera que la Candidatura Común esté en posibilidad de cumplir en tiempo y forma con la entrega de los informes exigidos por la Normatividad en la Materia.*

*b) Los responsables de la cuenta bancaria de la Candidatura Común, así como los candidatos según sea el caso, deberán recabar la documentación comprobatoria de los egresos que realicen, la cual deberá ser expedida a nombre de **MORENA** y conteniendo su clave de Registro Federal de Contribuyentes de conformidad con la Normatividad en la Materia:*

DOMICILIO: Santa Anita 50, Col. Viaducto Piedad, Delegación Iztacalco, México, DF. C.P: 08200

RFC: MOR1408016D4

c) Todos los comprobantes, el estado de cuenta y demás documentación relativa a las cuestiones financieras, toda la facturación y en general, los comprobantes y muestras que amparen y den evidencia de las compras, deberán reunir todos los requisitos fiscales, mercantiles y de fiscalización establecidos en la Normatividad en la Materia.

d) Ante una eventual falta de cumplimiento de la Normatividad en la Materia, el partido político que propuso al candidato será responsable solidario de su incumplimiento.

*e) En caso de incumplimiento en los requisitos de la comprobación por parte de alguno de los partidos integrantes de la Candidatura Común o bien, por parte de los candidatos propuestos por cada partido, el **Consejo de Administración** notificará a la **Comisión Coordinadora Nacional de la Candidatura Común** y al Partido responsable, las multas que en su caso sean impuestas a la Candidatura Común serán pagadas por el partido, a quién pertenezca la candidatura infractora.*

*4. Para efectos de determinar la aplicación, uso y control de los recursos, mecanismos de prorrateo, y demás cuestiones relativas al gasto, las determinaciones serán acordadas por el Consejo de Administración. El **Consejo de Administración** será el responsable del manejo eficiente y transparente del patrimonio de la Candidatura Común.*

De lo antes transcrito, se puede concluir lo siguiente:

- La candidatura común es una figura mediante la cual dos partidos o más pueden postular a un mismo candidato a un cargo de elección en el ámbito local.
- De conformidad con el convenio de candidatura común, existe un órgano de finanzas, el cual sería el responsable de rendir los informes parciales y finales, a través de los cuales se comprobará a la autoridad electoral los ingresos y gastos de la candidatura común. Que dicho órgano sería el Consejo de Administración el cual estaría integrado por un miembro designado por los partidos multicitados, siendo el caso que las decisiones serían tomadas por los tres partidos conforme a una votación ponderada.
- Que de una lectura integral del convenio de candidatura común, fue intención de los institutos políticos el que el Consejo de Administración actuara en representación de todos sus integrantes, al ser el encargado del manejo eficiente y transparente del patrimonio de la candidatura común, así como reportar los ingresos y gastos de campaña derivados de la aportación de recursos, y por tanto es quien funge como representante de cada uno de los partidos en lo individual y en su conjunto para los efectos del cumplimiento de obligaciones en materia de fiscalización.
- La función de dicho Consejo de Administración implica la actuación de éste en nombre de sus representados, por lo que sus actuaciones relativas a la administración, documentación y reporte de la aplicación de los recursos aportados por las partes son a nombre de la candidatura común, por lo que

los efectos derivados de dicho actuar recaen en la esfera jurídica de los partidos integrantes, como si hubieran sido realizados por estos.

- En estas condiciones, si el Consejo de Administración cometió infracciones en cuanto a la rendición de cuentas de todos sus integrantes, es válido atribuirles la responsabilidad a todos ellos.

De la revisión al SIF, a las pólizas, a la documentación adjunta al informe, así como de las consideraciones vertidas en párrafos precedentes y del análisis a las manifestaciones realizadas por el Partido Encuentro Social, esta autoridad fiscalizadora considera que el instituto político, integrante de la candidatura común, cambió el estatus del evento a “realizado-oneroso” sin haber realizado el registro del gasto derivado de los eventos observados, razón por la cual la observación no quedó atendida.

9_C1_P1

El sujeto obligado cambió el estatus del evento a “realizado-oneroso”, omitiendo registrar el gasto derivado por concepto de 23 eventos públicos, impidiendo a la autoridad realizar la verificación de los mismos, tal situación constituye a juicio de la UTF, el incumplimiento en lo establecido en el artículo 143 bis, del RF

(...)”

8. Que la Sala Ciudad de México revocó la resolución **INE/CG1135/2018**, particularmente el **considerando 34.9, inciso b)** relativo a la conclusión **9_C1_P1 atribuida al Partido Encuentro Social**, por lo que este Consejo General procede a la modificación expresamente ordenada por ese órgano jurisdiccional, en los siguientes términos:

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, EN EL ESTADO DE MORELOS (PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES)

(...)

34.9. PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del Informe de la precampaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado son las siguientes:

a) (...)

b) **1** Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión: **9_C1_P1**.

A continuación, se desarrollan los apartados en comento:

(...)

b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria, infractora de los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 con relación al 143 bis del Reglamento de Fiscalización: **Conclusión 9_C1_P1**

Visto lo anterior, a continuación, se presenta la conclusión final sancionatoria determinada por la autoridad en el Dictamen Consolidado.

No.	Conclusión
9_C1_P1	<i>“El sujeto obligado cambió el estatus del evento a “realizado-oneroso”, omitiendo registrar gastos por concepto de 23 eventos públicos, impidiendo a la autoridad realizar la verificación del mismo.”</i>

En consecuencia, al **no reportar gastos de los eventos registrados en la agenda como realizados y onerosos**, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos

y 127 con relación al 143 bis del Reglamento de Fiscalización, por tal razón la observación quedó no atendida.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en la observación de mérito, se hizo del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, a partir del momento de la notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad detectada.

Consecuente con lo anterior los sujetos obligados no obstante que presentaron un escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones, de su contenido no se advirtió presentara documentación o evidencia relativa a las observaciones en comento.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido, mediante requerimiento al instituto político correspondiente, con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito y así, salvaguardar la garantía de audiencia y que los candidatos contaran con la oportunidad de preparar una adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de las sanciones correspondientes, determinar la **responsabilidad de los sujetos obligados** en las consecuencias de las conductas materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el capítulo III *“DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS”* de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes que se refiere en el inciso anterior.”*

De lo anterior se desprende que, no obstante que el sujeto obligado haya omitido registrar gastos, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien

las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o coaliciones, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y egresos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.⁵

En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

⁵ Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y es en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta infracción.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los

partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.”

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, las respuestas del sujeto obligado no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al ente infractor de su responsabilidad ante las conductas observadas, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al sujeto obligado, pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Acatamiento a la Sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de México expediente SCM-RAP-62/2018.

De conformidad con la resolución recaída al expediente SCM-RAP-62/2018, la Sala Ciudad de México ordenó a este Consejo General emitir una nueva resolución en la que se determine si con base en el convenio de candidatura común correspondía o no al Partido Encuentro Social reportar los gastos e información que fue materia de observación.

Con el fin de cumplir con lo ordenado por la Sala Ciudad de México, se realizan las siguientes manifestaciones:

Establece el artículo 276, bis, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización lo siguiente:

“Artículo 276 Bis.

1. Se entiende por candidatura común o alianza partidaria a la figura mediante la cual dos o más partidos políticos, sin mediar coalición, pueden postular a un mismo candidato a un cargo de elección en el ámbito local.

[el subrayado es nuestro]

Ahora bien, el doce de enero de dos mil dieciocho, los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social presentaron un escrito ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana, conforme al cual solicitaban el registro de un convenio de candidatura común integrado por los partidos antes mencionados.

Es el caso que mediante Acuerdo IMPEPAC/CEE/017/2018 de fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, el organismo local requirió a los institutos políticos con el fin de que subsanaran las observaciones hechas al convenio de candidatura común presentado. Mediante escrito de veintisiete de enero del mismo año, los partidos políticos dieron cumplimiento al requerimiento de la autoridad local, quien

mediante Acuerdo IMPEPAC/CEE033/2018 de nueve de febrero del dos mil dieciocho, tuvo por cumplimentados los requerimientos realizados y por aprobado el registro del convenio de candidatura común firmado por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social.

En el convenio de candidatura común aprobado por el organismo local, los partidos de mérito, en la cláusula décima primera, acordaron lo siguiente:

“CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. Del monto de las aportaciones y reporte de los importes financieros para las campañas de la Candidatura Común.

(...)

*I. **LAS PARTES** reconocen que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos y en el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la Candidatura Común tendrá un Órgano de Finanzas, el cual será el responsable de rendir, en tiempo y en forma, los informes parciales y final a través de los cuales se compruebe a la autoridad electoral los ingresos y los egresos de la Candidatura Común.*

*El órgano de finanzas de la Candidatura Común será el **Consejo de Administración** que estará integrado por un miembro designado por cada uno de los partidos integrantes de la Candidatura Común, cuyas decisiones serán tomadas de conformidad con lo siguiente votación ponderada:*

DEL TRABAJO 20%

ENCUENTRO SOCIAL 20%

MORENA: 60%

No obstante, cada Partido Político es responsable de la comprobación de gastos en el porcentaje que finalmente aporten.

El Consejo de Administración de la Candidatura Común contará con las facultades necesarias para desempeñar sus funciones, de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el presente Convenio de Candidatura Común y demás disposiciones legales y administrativas aplicables.

*El **Consejo de Administración** tendrá a su cargo la gestión de los recursos de la Candidatura Común, provenientes de cualquiera de las modalidades*

legalmente previstas como fuentes de financiamiento, y la obligación de satisfacer los requisitos legales y reglamentarios para su comprobación, además de presentar los informes y reportes necesarios al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de los gastos de campaña ejercidos por la misma, conforme a las fechas y formas establecidas en la normatividad aplicable.

Cada Partido Político será responsable, en lo individual, de comprobar las aportaciones en efectivo de sus militantes y simpatizantes, de acuerdo con la normatividad prevista para tal efecto, así como de responder en forma individual por las faltas que, en su caso, incurra alguno de los Partidos Políticos suscriptores, sus militantes o candidatos, asumiendo la sanción correspondiente.

Los Partidos Políticos integrantes del presente convenio de Candidatura Común y sus candidatos se comprometen a observar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de fiscalización, en las que destacan que todos los gastos de campaña de la Candidatura Común sean pagados a través de las cuentas de la misma, así como para presentar ante la autoridad electoral un solo informe de gastos como Candidatura Común.

De presentarse el supuesto de que no se observe puntualmente la presente disposición, cada Partido Político, de forma individual, responderá por las sanciones que imponga la autoridad electoral fiscalizadora.

(...)

2. LAS PARTES *facultan al **Consejo de Administración** para que reciba las ministraciones que aporten los partidos de la Candidatura Común. Los cuales se comprometen a aportar dentro de un plazo máximo de 48 horas siguientes a la entrega de las ministraciones que realice el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana el porcentaje comprometido en esta cláusula, para destinarse al desarrollo de las campañas de los candidatos postulados por la Candidatura Común. En el supuesto de no disponer de ella, el **Consejo de Administración** podrá cobrar los recursos que no hayan sido entregados. en las subsecuentes prerrogativas partidarias hasta completar el faltante, independientemente de que la Candidatura Común termine sus efectos.*

*Adicionalmente a la prerrogativa que por financiamiento público reciba la Candidatura Común de las candidatas y los candidatos a Diputados Locales y miembros de un Ayuntamiento en el Estado de **Morelos**, los partidos políticos podrán realizar aportaciones en efectivo o en especie en los términos que establece la Ley y el Reglamento de Fiscalización*

a) Los recursos aportados por los Partidos Políticos participantes, así como los que por financiamiento público se señalan en la presente cláusula deberán ser presentados en los informes de campaña en los términos de la propia ley de la materia.

b) El uso y control de los recursos de la Candidatura Común deberá apegarse a los Lineamientos. Formatos e Instructivos Aplicables por el Instituto Nacional Electoral

c) Los informes de campaña de los candidatos de la Candidatura Común serán presentados por el **Consejo de Administración**, por conducto de sus integrantes, en los términos que exige la Normatividad en la Materia.

3. Deberá presentarse un informe por cada una de las campañas de elección en que haya participado la Candidatura Común, especificando los gastos que la Candidatura Común y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, así como el origen de los recursos que se hayan utilizado para financiar la campaña. En consecuencia, deberá presentarse:

a) Los candidatos de la Candidatura Común y los partidos que los propusieron tendrán la obligación de proporcionar al **Consejo de Administración** las relaciones de ingresos obtenidos y gastos realizados en las campañas, así como de recabar los soportes documentales y muestras correspondientes y remitirlos a dicho órgano, de manera que la Candidatura Común esté en posibilidad de cumplir en tiempo y forma con la entrega de los informes exigidos por la Normatividad en la Materia.

b) Los responsables de la cuenta bancaria de la Candidatura Común, así como los candidatos según sea el caso, deberán recabar la documentación comprobatoria de los egresos que realicen, la cual deberá ser expedida a nombre de **MORENA** y conteniendo su clave de Registro Federal de Contribuyentes de conformidad con la Normatividad en la Materia:

DOMICILIO: Santa Anita # 50, Col. Viaducto Piedad, Delegación Iztacalco, México, DF. C.P: 08200

RFC: MOR1408016D4

c) Todos los comprobantes, el estado de cuenta y demás documentación relativa a las cuestiones financieras, toda la facturación y en general, los comprobantes y muestras que amparen y den evidencia de las compras, deberán reunir todos los requisitos fiscales, mercantiles y de fiscalización establecidos en la Normatividad en la Materia.

d) Ante una eventual falta de cumplimiento de la Normatividad en la Materia, el partido político que propuso al candidato será responsable solidario de su incumplimiento.

e) En caso de incumplimiento en los requisitos de la comprobación por parte de alguno de los partidos integrantes de la Candidatura Común o bien, por parte de los candidatos propuestos por cada partido, el **Consejo de Administración** notificará a la **Comisión Coordinadora Nacional de la Candidatura Común** y al Partido responsable, las multas que en su caso sean impuestas a la Candidatura Común serán pagadas por el partido, a quién pertenezca la candidatura infractora.

4. Para efectos de determinar la aplicación, uso y control de los recursos, mecanismos de prorrateo, y demás cuestiones relativas al gasto, las determinaciones serán acordadas por el Consejo de Administración. El Consejo de Administración será el responsable del manejo eficiente y transparente del patrimonio de la Candidatura Común.

5. si al concluir las campañas electorales existieran remanentes respecto de las aportaciones, cuentas, activo fijo, saldos en cuentas por pagar, estos serán distribuidos entre los partidos políticos integrantes de la Candidatura Común, conforme a lo que acuerde el Consejo de Administración.

6. Las partes acuerdan entregar el 100% (cien por ciento) de su financiamiento público para las campañas que establece la Ley Electoral Local a la Candidatura Común a través de su Consejo de Administración quien se encargará de la administración de los recursos, de la siguiente manera:

a) Para las **dos** fórmulas de candidatos a Diputados Locales de mayoría relativa de los Distritos Electorales uninominales, **V** con cabecera en **Temixco** y **VIII** con cabecera en **Xochitepec**. se destinará el 2% (**dos por ciento**) del financiamiento público; y

b) Para la planilla de candidatos a miembros del Ayuntamiento de **Tlalnepantla** se destinará el 1% (**uno por ciento**) del financiamiento público.

El financiamiento público para las campañas será entregado a la Candidatura Común a través de su Consejo de Administración quien se encargará de la administración de recurso

Cada una de LAS PARTES, recibirá para el financiamiento público de las campañas de los candidatos que por origen partidario les corresponda, el total de su aportación señalado con anterioridad.

Por otra parte, es pertinente señalar que sólo Morena y Encuentro Social realizaron aportaciones a la candidatura común. Dichas aportaciones se presentan en el siguiente cuadro:

a) Encuentro Social

Nombre	Ingresos transferencia CEN en Especie	por del	Ingresos transferencia CEE en Especie	por del	Total de aportación
Elsa Delia González Solórzano	\$22,989.19		\$72,150.35		\$203,840.14
Andrés Duque Tinoco	23,390.10		73,408.62		
Jeovanna Lima Flores	4,097.14		7,804.74		

b) Morena

Nombre	Ingresos transferencia CEN en Especie	por del	Ingresos transferencia CEE en Especie	por del	Total de aportación
Elsa Delia González Solórzano	\$0.00		\$149,277.00		\$162,262.36
Andrés Duque Tinoco	0.00		143,244.41		
Jeovanna Lima Flores	0.00		19,017.95		

c) Partido del Trabajo

Nombre	Ingresos transferencia CEN en Especie	por del	Ingresos transferencia CEE en Especie	por del	Total de aportación
Elsa Delia González Solórzano	\$0.00		\$0.00		\$0.00
Andrés Duque Tinoco	0.00		0.00		
Jeovanna Lima Flores	0.00		0.00		

De lo antes transcrito, se puede concluir lo siguiente:

- La candidatura común es una figura mediante la cual dos partidos o más pueden postular a un mismo candidato a un cargo de elección en el ámbito local.
- De conformidad con el convenio de candidatura común, existe un órgano de finanzas, el cual sería el responsable de rendir los informes parciales y finales, a través de los cuales se comprobará a la autoridad electoral los ingresos y gastos de la candidatura común. Que dicho órgano sería el Consejo de Administración el cual estaría integrado por un miembro designado por los partidos multicitados, siendo el caso que las decisiones serían tomadas por los tres partidos conforme a una votación ponderada.

- Que de una lectura integral del convenio de candidatura común, fue intención de los institutos políticos el que el Consejo de Administración actuara en representación de todos sus integrantes, al ser el encargado del manejo eficiente y transparente del patrimonio de la candidatura común, así como reportar los ingresos y gastos de campaña derivados de la aportación de recursos, y por tanto es quien funge como representante de cada uno de los partidos en lo individual y en su conjunto para los efectos del cumplimiento de obligaciones en materia de fiscalización.
- La función de dicho Consejo de Administración implica la actuación de éste en nombre de sus representados, por lo que sus actuaciones relativas a la administración, documentación y reporte de la aplicación de los recursos aportados por las partes son a nombre de la candidatura común, por lo que los efectos derivados de dicho actuar recaen en la esfera jurídica de los partidos integrantes, como si hubieran sido realizados por estos.
- Que los partidos integrantes de la candidatura común acordaron entregar el 100% (cien por ciento) del financiamiento público para las campañas que establece la normatividad local
- En estas condiciones, si el Consejo de Administración cometió infracciones en cuanto a la rendición de cuentas de todos sus integrantes, es válido atribuirles la responsabilidad a todos ellos.
- Que cada partido es responsable de la comprobación de gastos en el porcentaje que finalmente aporten y, respecto de la imposición de multas a la candidatura común, las multas serán pagadas por el partido a quien pertenezca la candidatura infractora, esto es, las sanciones se pueden imponer a los partidos integrantes de la candidatura común y el pago de la multa impuesta corresponderá al partido del cual haya surgido la candidatura infractora.

Del análisis realizado en líneas precedentes, esta autoridad concluye que ante infracciones a la normatividad en materia de fiscalización, todos los partidos integrantes de la candidatura común son responsables en términos de la normatividad y el convenio de candidatura común firmado por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social.

Lo anterior es así, ya que el convenio no establece alguna condicionante que modifique la responsabilidad de los partidos, es decir, no existe cláusula o apartado

que establezca una responsabilidad diferenciada derivado del origen de postulación de candidatos o del tipo de campaña (diputados-ayuntamientos) en que participe la candidatura común, esto es, los partidos integrantes de la candidatura común tienen el mismo grado de responsabilidad respecto a las faltas en que incurra esta.

En todo caso, la única diferencia que hace el convenio es respecto al pago de la multa, al establecer que el partido origen de la candidatura infractora será el que pague la multa impuesta a la candidatura común conformada por los tres partidos multicitados.

Así, el Partido Encuentro Social era responsable de reportar los gastos objeto de la observación hecha por la autoridad como integrante de la candidatura común, por lo que es conforme a derecho que sea objeto de sanción.

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 con relación al 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral es el siguiente:

- a)** Tipo de infracción (acción u omisión)
- b)** Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c)** Comisión intencional o culposa de la falta.
- d)** La trascendencia de las normas transgredidas.
- e)** Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f)** La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g)** La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el Considerando VEINTIUNO de la presente Resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los elementos para calificar las faltas y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción.

CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).

En relación con la irregularidad identificada en la **conclusión 9_C1_P1** del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado registró en la agenda de eventos públicos eventos que clasificó como “realizados” y “onerosos”; sin embargo, no identificó, vinculó o reportó gasto alguno relacionado con dicho concepto, en el marco de la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Morelos.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado consistente en **no reportar gastos relativos a eventos registrados en la agenda como realizados y onerosos** durante la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Morelos, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 con relación al 143 bis del Reglamento de Fiscalización.

b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron.

Modo: El sujeto obligado omitió reportar gastos relativos a eventos registrados en la agenda como realizados y onerosos en el Informe de Campaña. De ahí que el partido contravino lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 con relación al 143 bis del Reglamento de Fiscalización.

Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió de la revisión del Informe de Campaña de los ingresos y egresos correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Morelos.

Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Morelos, concretándose en dicha entidad federativa.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, y no únicamente su puesta en peligro.

Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir reportar los gastos aludidos, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas respecto a los recursos erogados por el partido infractor en los eventos que registra en la agenda como realizados y onerosos.

Conviene precisar que, dentro de los procedimientos de revisión de informes de fiscalización, los partidos políticos se encuentran obligados a realizar (congruente y ordenadamente) el registro de la totalidad de los ingresos y gastos dentro del Sistema Integral de Fiscalización.

En el caso de los eventos registrados en la agenda, los sujetos obligados deben identificar cada evento con la documentación comprobatoria de los gastos, proporcionando a detalle los datos de la operación. Ello es así, ya que de conformidad con el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, los sujetos obligados son responsables de la información reportada en el Sistema de Contabilidad en Línea.

Es decir, al cambiar en la agenda el estatus del evento a “realizado” y “oneroso”, el sujeto obligado acepta la existencia del mismo y, consecuentemente, debe proceder a reportar los gastos involucrados; sin embargo, en el caso que nos ocupa no aconteció.

Lo anterior era indispensable para que la autoridad fiscalizadora, de forma oportuna y durante la revisión del informe respectivo, verificara si el gasto observado fue correctamente reportado.

Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En este orden de ideas, en la conclusión en comento, el sujeto obligado vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 con relación al 143 bis del Reglamento de Fiscalización, mismos que a la letra señalan:

Ley General de Partidos Políticos

“Artículo 79.

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:

b) Informes de Campaña:

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; (...)”

Reglamento de Fiscalización

“Artículo 127.

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.

2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”

“Artículo 143 Bis.

1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo.

2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.”

De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la obligación de registrar en la agenda de eventos políticos, todo y cada uno de los eventos que realice y, consecuentemente, presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el monto, destino y aplicación de los recursos involucrados; es decir, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su monto, destino y aplicación, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, siendo en el caso específico, aquellas erogaciones concernientes a los eventos que registró en la agenda de eventos políticos bajo el estatus de “realizados” y “onerosos”, otorgando en consecuencia una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normativa electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las hipótesis normativa prevista en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 con relación al 143 bis del Reglamento de Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta.

Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.

En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración al supuesto contenido en la norma.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro

al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas infracciones son siempre de resultado.

En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada la conducta.

En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por la conducta señalada es garantizar certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en **una falta de fondo**, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los sujetos obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así

como el hecho consistente en la posibilidad del ente político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **Considerando VEINTIUNO** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Conclusión 9 C1 P1

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar gastos relativos a eventos registrados en la agenda como realizados y onerosos, realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar gastos relativos a eventos registrados en la agenda como realizados y onerosos, mismos que fueron realizados durante la campaña en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Morelos, incumpliendo con la obligación que le impone la normativa electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Morelos.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los

elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁶

Antes de proceder a la imposición de la sanción que corresponde al Partido Encuentro Social, es pertinente señalar que conforme al SCM-RAP-62/2018 que en este acuerdo se acata, de los 23 (veintitrés) eventos no reportados, 3 (tres) no fueron controvertidos, mismos que corresponde a los candidatos Andrés Duque Tinoco y Jeovanna Lima Flores, razón por la cual la sanción que corresponde a los tres eventos se mantiene en sus términos. En este sentido, se procederá a realizar la imposición de la sanción correspondiente en dos apartados; por una parte se sancionará al Partido Encuentro Social respecto de los tres eventos que no fueron materia de impugnación, en términos de la Resolución INE/CG1135/2018. En un segundo apartado se sancionará al Partido Encuentro Social en los términos ordenados por la ejecutoria conforme al análisis precedente hecho en el apartado “INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN” respecto de la responsabilidad de dicho partido como integrante de una candidatura común.

a) Sanción al Partido Encuentro Social derivada de los tres eventos no impugnados en el SCM-RAP-62/2018.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a **70 (setenta)** Unidades de Medida y Actualización por cada cambio realizado en los eventos (tres eventos), lo que arroja un total de 210 (doscientas diez) Unidades de Medida y Actualización, cantidad que asciende a un total de **\$16,926.00** (dieciséis mil novecientos veintiséis pesos 00/100 M.N.)

⁶ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Encuentro Social es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad que asciende a **210 (doscientas diez)** Unidades de Medida y Actualización, cantidad que asciende a un total de **\$16,926.00** (dieciséis mil novecientos veintiséis pesos 00/100 M.N.)

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

b) Sanción al Partido Encuentro Social derivada de los veinte eventos impugnados en el SCM-RAP-62/2018.

Antes de entrar a la imposición de la sanción que se desarrollará en este inciso, es pertinente señalar que, si bien la candidatura común está integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, los dos primeros institutos mencionados, no tuvieron garantía de audiencia respecto a la infracción objeto de estudio, por lo que, si bien se hará un análisis de su responsabilidad, esta autoridad no se encuentra en posibilidad de aplicar alguna sanción a los partidos de mérito.

Lo anterior, se robustece con la Jurisprudencia 20/2013, con rubro GARANTÍA DE AUDIENCIA. DEBE OTORGARSE POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, que a la letra señala:

Margarita Padilla Camberos y otros
VS

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

Jurisprudencia 20/2013

GARANTÍA DE AUDIENCIA. DEBE OTORGARSE POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 14, 16, 41, Base IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23, párrafo 1, 27 y 38, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que la garantía del debido

procedimiento es un derecho fundamental y que los partidos políticos, en tanto entidades de interés público, con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la Constitución federal y en las leyes reglamentarias, deben respetar los derechos fundamentales de sus militantes, para lo cual están obligados a incluir en sus Estatutos procedimientos que cumplan con las garantías procesales mínimas. En esas condiciones, la garantía de audiencia debe observarse por los partidos políticos, previo a la emisión de cualquier acto que pudiera tener el efecto de privar a sus afiliados de algún derecho político-electoral, constitucional, legal o estatutario, en la que tengan la posibilidad de ser oídos y vencidos en el procedimiento, con la oportunidad de aportar elementos de prueba para una adecuada defensa.

Quinta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-851/2007.—Actores: Margarita Padilla Camberos y otros.—Responsable: Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional.—1 de agosto de 2007.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretario: Héctor Rivera Estrada.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-286/2008.—Actor: Hipólito Rigoberto Pérez Montes.—Responsable: Comisión de Orden del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional.—23 de abril de 2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Sergio Dávila Calderón.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-475/2008.—Actora: Claudia Edith Neri Sánchez.—Responsable: Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Jalisco.—10 de julio de 2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Ernesto Camacho Ochoa y Erik Pérez Rivera.

Notas: Los preceptos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales interpretados en el primer precedente, son anteriores a la reforma legal publicada el 14 de enero de 2008, en el Diario Oficial de la Federación.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el catorce de agosto de dos mil trece, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 45 y 46.

Así, de la transcripción anterior, se desprende que previo a la emisión de un acto de molestia o afectación la autoridad debe hacer de su conocimiento a los involucrados a efecto de que estos tengan la posibilidad de ser oídos y vencidos en el procedimiento, con la oportunidad de aportar elementos de prueba para una adecuada defensa, lo cual en el caso en concreto no aconteció, de ahí que resulte inviable que esta autoridad administrativa imponga una sanción a los sujetos incoados.

Del análisis al convenio de candidatura común realizado en líneas precedentes, se observó que los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social en términos de la cláusula décima primera establecieron, entre otros elementos, lo siguiente:

- Cada partido político es responsable de la comprobación de gastos en el porcentaje que finalmente aporte. (cláusula décima primera, numeral 1).
- Que los institutos políticos integrantes de la candidatura común acordaron entregar el 100% (cien por ciento) de su financiamiento público. (cláusula décima primera, numeral 6)

En este sentido, se procede a determinar los porcentajes de sanción que corresponde a los partidos de la candidatura común.

El artículo 276 bis, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización establece lo siguiente:

“Artículo 276 Bis

(...)

3. Para la imposición de sanciones se considerará el porcentaje de aportaciones que, de acuerdo al Dictamen correspondiente, se realizaron por cada partido en beneficio de la candidatura.”

[el subrayado es nuestro]

Del artículo en comento, se desprende que, para la imposición de sanciones a una candidatura común, distinto al criterio que establece el artículo 340 del Reglamento de Fiscalización aplicable a coaliciones, la autoridad electoral debe considerar el porcentaje de aportación, que, de acuerdo con el Dictamen correspondiente, realizaron los partidos integrantes de la candidatura común.

En este sentido, tomando en consideración el monto de aportación realizado por los partidos integrantes de la candidatura común, conforme a los datos obtenidos del Dictamen Consolidado, se procede a calcular el porcentaje de aportación, y por consiguiente obtener los porcentajes aplicables a las sanciones que se impongan a los partidos políticos integrantes de la candidatura común.

La siguiente tabla muestra el monto de aportación por cada partido político y el total aportado. Asimismo, se puede observar el porcentaje de sanción obtenido al utilizar el método matemático conocido como “regla de tres”:

Partido Político	Monto de aportación conforme al Dictamen Consolidado	Monto total de aportación a la candidatura común (100%)	Porcentaje de sanción
	(A)	(B)	$C = (A \cdot 100\%) / B$
Morena	\$162,262.14	\$366,102.50	44%
Partido del Trabajo	\$0.00		0%
Partido Encuentro Social	\$203,840.14		56%
		Total	100%

Tal y como puede desprenderse de la tabla anterior, conforme al artículo 276 bis, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, y en cumplimiento a los principios de proporcionalidad y certeza, solo los partidos Morena y Encuentro Social estarían sujeto a la imposición de sanciones, toda vez que el Partido del Trabajo, conforme al Dictamen correspondiente, no realizó aportaciones en beneficio de la candidatura.

En este sentido, excluyendo al Partido Morena conforme a lo indicado en el primer párrafo de este apartado, se procede a imponer la sanción que en derecho corresponda al Partido Encuentro Social.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a **70 (setenta)** Unidades de Medida y Actualización por cada cambio realizado en los eventos (veinte eventos), lo que arroja un total de **1400 (mil cuatrocientas)** Unidades de Medida y Actualización, cantidad que asciende a un total de **\$112,840.00 (ciento doce mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)**. Al respecto, de las 1,400 (mil cuatrocientas) Unidades de Medida y Actualización que representan el 100% (cien por ciento) de la sanción, corresponden al Partido Encuentro Social **784 (setecientos ochenta y cuatro)** Unidades de Medida y Actualización, que representan el 56% (cincuenta y seis por ciento de la multa), lo que da como resultado un monto de **\$63,190.40 (sesenta y tres mil ciento noventa pesos 40/100 M.N.)**.

En consecuencia, atendiendo al porcentaje de aportación determinado en el Dictamen correspondiente, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al Partido Encuentro Social en lo individual, lo correspondiente al 56% (cincuenta y seis por ciento) del monto total de la sanción, en los términos del

artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad que asciende a **784 (setecientos ochenta y cuatro)** Unidades de Medida y Actualización, lo que da como resultado un monto de **\$63,190.40 (sesenta y tres mil ciento noventa pesos 40/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

9. Que la sanción originalmente impuesta al Partido Encuentro Social en el estado de Morelos, en la resolución **INE/CG1135/201**, conclusión 9_C1_P1 consistió en:

Sanción en resolución INE/CG1135/2018	Modificación	Sanciones en Acatamiento al SCM-RAP-62-2018
<p>NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 34.9 de la presente Resolución, se imponen al Partido Encuentro Social las sanciones siguientes:</p> <p>(...)</p> <p>b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 9_C1_P1</p> <p>Conclusión 9_C1_P1 Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al Partido Encuentro Social, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad que asciende a 1,610 (mil seiscientos diez) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho cuyo monto equivale a \$129,766.00 (ciento veinte nueve mil setecientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.).</p> <p>(...)</p>	<p>Para dar cumplimiento al mandato de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contenido en los considerandos CUARTO y QUINTO recurso de apelación SCM-RAP-62/2018 se determinó que el Partido Encuentro Social si tenía la obligación de reportar los gastos e información materia de observación en términos del convenio de candidatura común aprobado en términos de los acuerdos IMPEPAC/CEE/017/2018 e IMPEPAC/CEE/033/2018. En este sentido se procedió a sancionar al partido político en los siguientes términos:</p> <p>a) Sanción al Partido Encuentro Social derivada de los tres eventos no impugnados en el SCM-RAP-62/2018.</p> <p>b) Sanción al Partido Encuentro Social derivada de los veinte eventos impugnados en el SCM-RAP-62/2018.</p>	<p>NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 34.9 de la presente Resolución, se imponen al Partido Encuentro Social las sanciones siguientes:</p> <p>(...)</p> <p>b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 9_C1_P1</p> <p>Conclusión 9_C1_P1 b.1) Sanción al Partido Encuentro Social derivada de los tres eventos no impugnados en el SCM-RAP-62/2018.</p> <p>Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al Partido Encuentro Social, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad que asciende a 210 (doscientas diez) Unidades de Medida y Actualización, cantidad que</p>

Sanción en resolución INE/CG1135/2018	Modificación	Sanciones en Acatamiento al SCM-RAP-62-2018
		<p>asciende a un total de \$16,926.00 (dieciséis mil novecientos veintiséis pesos 00/100 M.N.).</p> <p>b.2) Sanción al Partido Encuentro Social derivada de los veinte eventos impugnados en el SCM-RAP-62/2018</p> <p>Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al Partido Encuentro Social, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad que asciende a 784 (setecientos ochenta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización, cantidad que asciende a un total de \$63,190.40 (sesenta y tres mil ciento noventa pesos 40/100 M.N.).</p>

10. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el presente Acuerdo, se modifica el inciso **b)** del Resolutivo **NOVENO** de la Resolución **INE/CG1135/2018**, para quedar en los siguientes términos:

“R E S U E L V E

“(…)

NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 34.9 de la presente Resolución, se imponen al **Partido Encuentro Social** las sanciones siguientes:

(…)

b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión **9_C1_P1**

Conclusión 9_C1_P1

b.1) Sanción al Partido Encuentro Social derivada de los tres eventos no impugnados en el SCM-RAP-62/2018.

Una reducción del **25%** (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al **Partido Encuentro Social**, por concepto de Financiamiento Público

para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad que asciende a **210 (doscientas diez)** Unidades de Medida y Actualización, cantidad que asciende a un total de **\$16,926.00** (dieciséis mil novecientos veintiséis pesos 00/100 M.N.).

b.2) Sanción al Partido Encuentro Social derivada de los veinte eventos impugnados en el SCM-RAP-62/2018.

Una reducción del **25%** (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al **Partido Encuentro Social**, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad que asciende a **784 (setecientos ochenta y cuatro)** Unidades de Medida y Actualización, cantidad que asciende a un total de **\$63,190.40 (sesenta y tres mil ciento noventa pesos 40/100 M.N.)**.

(...)

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

A C U E R D A

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen **INE/CG1134/2018** y la Resolución **INE/CG1135/2017**, aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el seis de agosto dos mil dieciocho, en los términos precisados en los Considerandos **6 a 10** del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral informe a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SCM-RAP-62/2017**.

TERCERO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1262/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA A LOS RECURSOS DE APELACIÓN IDENTIFICADOS CON LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTE SCM-RAP-63/2018 Y SU ACUMULADO SCM-RAP-70/2018

A N T E C E D E N T E S

I.- En sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG1122/2018, emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los Candidatos a los cargos de Diputados locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017- 2018, en el estado de Guerrero.

II. Inconformes con lo anterior, los días diez y catorce de agosto de dos mil dieciocho, el Partido de la Revolución Democrática y el C. Efrén Ángel Romero Sotelo interpusieron sendos recursos de apelación radicados en la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción Electoral con sede en la Ciudad de México bajo los números SCM-RAP-63/2018 y SCM-RAP-70/2018, respectivamente.

III. Esa Sala Regional consideró que, en el caso, procedía acumular los recursos de apelación, pues del análisis de las demandas estableció la existencia de conexidad en la causa, toda vez que existe identidad en la autoridad responsable y en el acto impugnado, por lo que procedió a decretar la acumulación del expediente SCM-RAP-70/2018 al diverso SCM-RAP-63/2018.

IV. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso de apelación referido, en sesión pública celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, determinando en sus Puntos Resolutivos SEGUNDO y TERCERO, lo que a continuación se transcribe:

“SEGUNDO. Se confirma la Resolución impugnada en cuanto a las sanciones impuestas al PRD derivadas de los informes de ingresos y gastos de las candidaturas de la Coalición a las diputaciones locales y ayuntamientos de Guerrero que fueron materia de controversia.

TERCERO. Se revoca la Resolución impugnada, en lo relativo al rebase en el tope de gastos de campaña del Candidato, en los términos y para los efectos fijados en el último considerando de esta ejecutoria.”

V. Derivado de lo anterior, la sentencia recaída al recurso de apelación **SCM-RAP-63/2018 y su acumulado SCM-RAP-70/2018**, tuvo por efectos revocar parcialmente la resolución INE/CG1122/2018, así como el Dictamen Consolidado, se procede a su modificación, por lo que con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, en consecuencia se presenta el Proyecto de mérito.

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44, numeral 1, incisos j); 190, numeral 1; y 191, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios de la revisión de los Informes de ingresos y gastos de campaña que presenten los Partidos Políticos Nacionales y coaliciones.

2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso del recurso de apelación identificado como SCM-RAP-63/2018 y su acumulado SCM-RAP-70/2018.

3. Que el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió revocar parcialmente la resolución INE/CG1122/2018, así como el Dictamen Consolidado, se procede a su modificación para los efectos precisados en el presente Acuerdo. A fin de dar cumplimiento al mismo, se procederá a modificar la Resolución y el Dictamen Consolidado de referencia, observando a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria.

4. Que por lo anterior y en razón de los Considerandos **SEXTO** y **SÉPTIMO** de la sentencia de mérito, relativos al estudio de fondo y efectos de la sentencia, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó lo que a continuación se transcribe:

“SEXTO. Estudio de fondo.

(...)

III. Análisis del Apartado B (REBASE EN EL TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA POR PARTE DEL CANDIDATO).

III.1. Caso concreto

El Candidato fue postulado por la Coalición al cargo de presidente municipal en el Ayuntamiento Teloloapan, Guerrero.

Así, en el marco de sus atribuciones de fiscalización, el INE llevó a cabo visitas de verificación a diversos actos de campaña de las candidaturas contendientes en Guerrero, siendo el caso que el cuatro de junio del año en curso efectuó una visita a la casa de campaña del Candidato de la que obtuvo distintos hallazgos.

En ese orden de ideas, la UTF elaboró la propuesta de Dictamen, misma que fue sometida al análisis de la Comisión de Fiscalización del Consejo General y posteriormente a la consideración de este último.

De conformidad con los resultados arrojados en el cómputo respectivo, el Candidato resultó electo²⁴ como presidente municipal de Teloloapan.

Luego, conforme a sus obligaciones constitucionales y legales, el seis de agosto del año en curso el Consejo General emitió la Resolución impugnada, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los Candidatos a los cargos de Diputados locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Guerrero.

En la Resolución impugnada, el Consejo responsable señaló, entre otras cuestiones, que se había acreditado que el Candidato excedió el tope de gastos de campaña fijado para la elección de presidente municipal por un total de veintitrés mil ochocientos ochenta y dos pesos 03/100 M.N. (\$23,882.03), vulnerando con ello lo establecido en el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley Electoral.

Lo anterior, se consideró así, pues si el total de gastos reportados en el SIF por el Candidato fue de doscientos setenta y seis mil doscientos setenta y seis pesos 46/100 M.N. (\$276,276.46), mientras que el tope de gastos de campaña correspondiente a la elección del referido cargo se estableció en doscientos cincuenta y dos mil trescientos noventa y siete pesos 43/100 M.N. (\$252,397.43), de lo cual concluyó que aquél había rebasado el límite impuesto por un monto de veintitrés mil ochocientos ochenta y dos pesos 03/100 M.N. (\$23,882.03).

Consecuentemente, el Consejo responsable calificó la falta como grave ordinaria y le impuso una sanción económica al PRD equivalente al cien por ciento (100%) del monto involucrado, esto es, por veintitrés mil ochocientos ochenta y dos pesos 03/100 M.N. (\$23,882.03).

Derivado de lo anterior, los Recurrentes se inconformaron arguyendo diversos motivos de disenso que se dirigen a controvertir el estudio realizado por el Consejo responsable respecto al supuesto rebase en el tope de gastos de campaña que se había actualizado.

Ahora bien, el dieciocho de agosto del año en curso, el Secretario Ejecutivo del INE, en su calidad de Secretario Ejecutivo del INE, en su calidad de Secretario del Consejo responsable,²⁵ en términos de lo previsto en los artículos 36, numeral 1, así como 41, numeral 2, de la Ley Electoral, remitió el escrito presentado por el representante del PRD para ampliar sus agravios respecto al acto reclamado por lo que hace a la elección de Teloloapan, combatiendo la ilegal vista ordenada al Tribunal Electoral del Estado de Guerrero y a esta Sala Regional en el apartado 3.11 de la Resolución impugnada, referente al supuesto rebase de tope de gastos de campaña de la elección del referido ayuntamiento, por el PAN y el PRD en el Proceso Electoral en curso.

La ampliación aludida se centró en combatir el presunto engrose del Dictamen y la Resolución impugnada, pues de acuerdo al dicho del PRD, el seis de agosto del presente año, durante la sesión del Consejo General del INE, dichos documentos fueron objeto de modificaciones, dentro de las cuales se encuentran las vistas descritas en el párrafo precedente.

De conformidad con lo anterior, en la contestación de agravios que formula el Secretario del Consejo General en su informe circunstanciado, a propósito del escrito de ampliación de demanda previamente aludido, señala lo que a continuación se transcribe a la letra:

“Derivado de la valoración al escrito inicial presentado por el promovente, la Dirección de Auditoría de la Unidad Técnica de Fiscalización identificó gastos que en efecto no lo benefician al otrora candidato C. Efrén Ángel Romero Sotelo, mismos que serían descontados del monto total acumulado por gastos no reportados y por tanto, si la sentencia así lo determina, se realizaría el cálculo correspondiente con el cual no se actualizaría el supuesto del rebase de topes de gastos de campaña.”

En efecto, como queda de manifiesto en la transcripción anterior, al percatarse de inconsistencias impactadas en el Dictamen por parte de la UTF y posteriormente en la Resolución impugnada respecto al rebase de tope de gastos de campaña en el que supuestamente incurrió el Candidato, el Secretario del Consejo Responsable hizo del conocimiento de esta Sala Regional dicha situación, ello a fin de que en caso de así determinarlo este órgano jurisdiccional se pudiera efectuar un nuevo cálculo respecto al tope de gastos, subsanando el error en el que incurrieron las autoridades mencionadas.

III.2. Respuesta a los Recurrentes.

Conforme al marco jurídico y los hechos del caso concreto, esta Sala Regional considera fundados los agravios de los Actores, en atención a lo que enseguida se explica.

Es importante comprender en este punto que el estudio del rebase de tope de gastos de campaña debe de partir de la base de la acreditación objetiva y material de la falta conforme a lo dispuesto en el numeral 41, Base VI, inciso a) y penúltimo párrafo de la Constitución.

Es así como la acreditación objetiva y material de las conductas irregulares que impactan en la equidad en la contienda, implica invariablemente evidenciar de manera fehaciente y no con base en meras afirmaciones o presunciones, que las acciones señaladas como origen de tales conculcaciones tienen respaldo fáctico; es decir, ocurrieron en la realidad, para estar en posibilidad de calificar su gravedad y trascendencia así como, en su caso, de atribuirles las consecuencias sancionatorias correspondientes.

Así, es necesario reflexionar en este apartado que por disposición constitucional y legal el Consejo General –a través de la Unidad Técnica– tiene la atribución de resolver en definitiva el proyecto de Dictamen Consolidado, así como de cada uno de los informes que los partidos políticos están obligados a presentar, conforme con lo dispuesto en los artículos 190, párrafo 2; 191, inciso c) y el artículo 196, párrafo 1, de la Ley Electoral.

Además, tomando en consideración que el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la Ley de Partidos, establece que los informes de campaña deben ser presentados por los partidos políticos, para cada campaña en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado y que por su parte, el artículo 80, numeral 1, inciso d), del precepto legal en cita establece el procedimiento para la revisión de los informes de gastos de campaña, en el cual la UTF revisará y auditará, simultáneamente al desarrollo de la campaña, el destino que le den los partidos políticos y sus candidaturas a los recursos de campaña.

Así, una vez entregados los informes, la Unidad Técnica contará con diez (10) días para revisar la documentación soporte y la contabilidad presentada y, en el caso de la existencia de errores u omisiones, otorgará un plazo de cinco días contados a partir de la notificación que al respecto realice al partido, para que éste presente las aclaraciones o rectificaciones que considere pertinentes. En ese orden de ideas, concluida la revisión del último informe, la Unidad Técnica contará con un término de diez (10) días para realizar el Dictamen Consolidado y la propuesta de resolución, para someterlos a consideración de la Comisión de Fiscalización del INE, la cual tendrá un término de seis (6) días para votar dichos proyectos y presentarlos al Consejo General.

Luego, si la Resolución impugnada encuentra sustento en el Dictamen, pues en este se incluyen los elementos para acreditar de manera objetiva y material los gastos a incluir para el análisis de un eventual rebase en el tope de gastos de campaña y, en el caso concreto, dicho Dictamen ha sido señalado como incierto por el mismo Consejo responsable, poniendo en duda la correcta tutela de bienes jurídicos tales como la transparencia, rendición de cuentas y la equidad en la contienda, esta Sala Regional

considera que debe revocarse la Resolución impugnada, puesto que la misma se encuentra indebidamente fundada y motivada.

En efecto, esta Sala Regional considera que la Resolución impugnada no cumple con la exigencia establecida en el artículo 16 de la Constitución en cuanto a la motivación, pues dicha garantía se transgrede cuando los razonamientos sean de tal modo imprecisos que no proporcionen elementos para la defensa de los derechos de la ciudadanía, tal como se establece en la tesis **XIV.2o.45 K**, cuyo rubro es: **“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA INADECUADA O INDEBIDA EXPRESIÓN DE ESTA GARANTÍA CONFIGURA UNA VIOLACIÓN FORMAL A LA LEY APLICADA”**, la cual resulta orientadora para este órgano jurisdiccional.

Más aún si el mismo Consejo General razonó en su informe circunstanciado la falta de confiabilidad del Dictamen, documental que es parte integrante de la Resolución impugnada, relacionada con las irregularidades encontradas en la revisión de los respectivos informes, elemento SINE QUA NON para su elaboración, al incluir el sustento para la motivación y fundamentación de las determinaciones a las que llegó la mencionada autoridad respecto al presunto rebase en el tope de gastos.

En consecuencia, ante las deficiencias que el propio Consejo responsable reconoce se actualizaron al emitir el Dictamen con base en el cual emitió la Resolución impugnada y por la que sostuvo que el Candidato había incurrido en el rebase de tope de gastos de campaña, en términos del artículo 15, numeral 1, de la Ley de Medios, el cual señala que no son objeto de prueba los hechos que han sido reconocidos, este órgano jurisdiccional concluye que la misma no resulta ajustada a Derecho, de ahí que el agravio a estudio resulte **fundado** y deba revocarse la Resolución impugnada en cuanto al mencionado rebase, para los efectos que se precisan a continuación.

Por lo antes expuesto, esta Sala Regional estima que al haber resultado fundado y suficientes para revocar la Resolución impugnada el agravio previamente estudiado, resulta innecesario el análisis de los restantes motivos de disenso, cuenta habida que los Recurrentes han alcanzado su pretensión, lo que es acorde con el criterio orientador contenido en la jurisprudencia **VI.2o.A. J/9**, de Tribunales Colegiados de Circuito, bajo el rubro: **“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO”**.

SÉPTIMO. Efectos de la sentencia. Esta Sala Regional, para garantizar el pleno goce y hacer efectivos los derechos de los Recurrentes, procede a fijar los efectos consecuentes con lo aquí establecido, con fundamento en los artículos 17 y 99 de la

*Constitución, que imponen el deber de impartir justicia de manera pronta, completa e imparcial; 6 de la Ley de Medios, que establece la facultad decisoria plena de las Salas Electorales, considerando que la justicia es completa hasta que se ejecuten las sentencias y que dicha ejecución se torna más asequible en tanto se fijen con la mayor claridad los efectos jurídicos consecuentes con las decisiones tomadas y los argumentos en que descansan; así como en lo dicho por la Sala Superior en la tesis **XXVII/2003**, de rubro: “**RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. MODALIDADES EN SUS EFECTOS PARA PRESERVAR EL INTERÉS GENERAL**”.*

Al haberse concluido que el Dictamen cuenta con inconsistencias únicamente en lo relativo a la cuantificación de los gastos del Candidato en el municipio de Teloloapan y que en el considerando que antecede se determinó resulta procedente revocar parcialmente la Resolución impugnada por cuanto a ese aspecto, quedan firmes las multas impuestas al PRD con motivo de los informes de gastos de campaña de sus candidaturas a las diputaciones locales y ayuntamientos en Guerrero.

De conformidad con lo expuesto, se precisan los siguientes efectos:

- 1. Se ordena al Consejo General realice una nueva revisión del informe de campaña de ingresos y gastos del Candidato, luego de lo cual deberá emitir el respectivo Dictamen Consolidado.*
- 2. Una vez que cuente con el nuevo Dictamen Consolidado de ingresos y gastos del Candidato, el Consejo General deberá emitir una nueva resolución.*
- 3. Lo anterior deberá llevarlo a cabo en un plazo que no deberá exceder los **veinte días** naturales contados a partir de la legal notificación del presente fallo, siendo que dentro de las **veinticuatro horas** siguientes a que emita la determinación que en derecho corresponda, deberá informarlo a esta Sala Regional.”*

5. En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por la cual revocó la Resolución impugnada en lo relativo al rebase de tope de gastos determinado al C. Efrén Ángel Romero Sotelo, candidato común al municipio de Teloloapan, Guerrero, postulado por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la sentencia:

Sentencia	Efectos	Acatamiento		
Se revoca la Resolución impugnada, en lo relativo al rebase en el tope de gastos de campaña del Candidato, al municipio de Teloloapan, Guerrero.	Realizar una nueva revisión del informe de campaña de ingresos y gastos del Candidato; emitir el respectivo Dictamen Consolidado; y emitir una nueva resolución.	Se realizó una nueva revisión del informe de campaña de ingresos y gastos del otrora candidato Efrén Ángel Romero Sotelo, para emitir el respectivo Dictamen Consolidado, por lo que al realizar la cuantificación de los gastos se determinó que acumulando los gastos no reportados al informe de campaña del otrora candidato Efrén Ángel Romero Sotelo, emitiendo una nueva resolución de la cual se desprende que no se configura el rebase de topes, como se detalla a continuación		
		Tope de gasto	Diferencia del tope	% del gasto total respecto al tope
		\$252,397.43	\$22,220.69	91.20%

Derivado de la valoración realizada en acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Consejo General modifica la Resolución INE/CG1122/2018, así como el respectivo Dictamen Consolidado respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los Candidatos a los cargos de Diputados locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017- 2018, en el estado de Guerrero, en la parte conducente de las conclusiones 10 del Partido Acción Nacional y 17 del Partido de la Revolución Democrática, relativas al rebase de tope de gastos determinado al C. Efrén Ángel Romero Sotelo, en términos del **Anexo 1 del presente Acuerdo**.

6. Que la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al dejar intocadas en la sentencia recaída al expediente SCM-RAP-63-2018 y su acumulado SCM-RAP-70/2018, las demás consideraciones que sustentan la Resolución **INE/CG1122/2018**, este Consejo General únicamente se avocará al estudio y análisis de los considerandos 42.1 y 42.3, relativo a las partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, en específico respecto de las conclusiones 10 y 17, relativas al rebase de tope de gastos determinado al C. Efrén Ángel Romero Sotelo.

Esta autoridad procedió en acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Cuarta Circunscripción

Plurinominal, Ciudad de México, mediante Resolución SCM-RAP-63/2018 y su acumulado SCM-RAP-70/2018, a realizar una nueva revisión del informe de campaña de ingresos y gastos del otrora candidato al municipio de Teloloapan, Guerrero, Efrén Ángel Romero Sotelo, para emitir el respectivo Dictamen Consolidado, por lo que al realizar la cuantificación de los gastos se determinó lo siguiente:

Gastos no reportados aprobados mediante Acuerdo INE/CG1121/2018					
Procedimiento mediante el que se detectó	Partido Político	Núm. de conclusión	Concepto de gasto no reportado	Monto valuado	Referencia
Visitas de verificación	CC PRD	3_C10_P1	Volantes	2,505.60	2
			Volantes	11,300.00	2
			Volantes	6,780.00	2
			Bocina	4,640.00	1
			Bardas (fachada de la casa de campana)	141.78	2
			4 Sillas	23.20	4
			1 escritorio de metal	1,730.00	4
			1 Impresora	1,144.00	4
			1 Equipo de cómputo	5,800.00	4
		3_C11_P1	Equipo de sonido: 4 Bocinas color negras, 1 micrófono y 1 amplificador	4,640.00	1
			Equipo de sonido: 27 Bocinas Negras	4,640.00	3
			100 porciones de Alimentos	9,860.00	4
			250 sillas	1,450.00	4
Monitoreo de Radio y TV Prorratio		3_C9_P1	Monitoreo de Spots de Radio y TV Prorratio	8,079.06	4

Por lo que respecta a los gastos señalados con 1 en la columna “Referencia” del cuadro que antecede, de la verificación al SIF se constató que se encuentran reportados en la póliza PN1/DR12/30-06-18 de la contabilidad del candidato; por tal razón, la observación **quedó atendida**.

Referente a los gastos señalados con 2 en la columna “Referencia” del cuadro que antecede, de la verificación al SIF se constató que corresponden a gastos que benefician a la candidata a Senadora Beatriz Mojica Morga, a la candidata a Diputada Federal Azucena Salazar, así como al candidato a Presidente Municipal,

Tomas Meneses Chávez; mismos que fueron reportados en las pólizas PN2/PD13/08-05-18; PN3/PD3/01-06-18 y PC1/PD1/13-07-18 respectivamente y acumulados a los informes correspondientes, por lo que al no existir beneficio para el otrora candidato Efrén Ángel Romero Sotelo los gastos no fueron acumulados en su informe de campaña; por tal razón, la observación **quedó sin efecto**.

Respecto al gasto señalado con 3 en la columna “Referencia” del cuadro que antecede, se observó que se encuentra duplicado, toda vez que ya había sido objeto de observación en la conclusión 10; por tal razón la observación **quedó sin efectos**.

Finalmente, los gastos señalados con 4 en la columna “Referencia” del cuadro que antecede, se constató que no se encuentran reportados en la contabilidad del candidato, por lo que el monto determinado inicialmente no se modifica; quedando de la siguiente manera:

Procedimiento mediante el que se detectó	Partido Político	Núm. de conclusión	Concepto de gasto no reportado	Monto valuado
Visitas de verificación	CC PRD	3_C10-P1	4 Sillas	23.20
			1 Escritorio de metal	1,730.00
			1 Impresora	1,144.00
			1 Equipo de cómputo*	5,800.00
		3_C11-P1	100 porciones de Alimentos	9,860.00
			250 Sillas	1,450.00
Monitoreo de Radio y TV Prorratio		3_C9_P1	Monitoreo de Spots de Radio y TV Prorratio	2,423.72
Total				\$22,430.92

Del análisis antes señalado, se determinó que acumulado los gastos no reportados al informe de campaña del otrora candidato Efrén Ángel Romero Sotelo, no se configura el rebase de topes como se detalla a continuación:

Concepto	Reportado	No reportado	Total reportado y no reportado	Tope de gasto	Diferencia del tope	% del gasto total respecto al tope
Gastos						
CC PRD	\$120,744.00	\$22,430.92	\$143,174.92			
CC PAN	87,001.82	0.00	87,001.82			
Total gastos	\$207,745.82	\$22,430.92	\$230,176.74	\$252,397.43	\$22,220.69	91.20%

Tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos valer en el considerando precedente, en cumplimiento al determinado por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la ejecutoria, materia del presente Acuerdo, es necesario precisar que la Unidad Técnica de Fiscalización valoró de nueva cuenta la documentación soporte que obra en el SIF respecto de las **conclusiones 10 del Partido Acción Nacional y 17 del Partido de la Revolución Democrática, determinando la inexistencia de la conducta infractora** consistente en el rebase de topes de campaña, razón por la cual, **quedan sin efectos**.

7. Que la sanción originalmente impuesta a los **partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática** en la Resolución **INE/CG1122/2018**, en sus Puntos Resolutivos **PRIMERO** y **TERCERO**, relativos a las conclusiones **10** y **17** respectivamente, en relación al presente acatamiento por el que se da cumplimiento a la sentencia recaída al expediente **SM-RAP-63-2018** y su acumulado **SCM-RAP-70/2018**, es la siguiente:

Resolución INE/CG1122/2018			Acuerdo por el que se da cumplimiento		
Conclusión	Monto Involucrado	Sanción	Conclusión	Monto Involucrado	Sanción
42.1 Partido Acción Nacional					
10. "El sujeto obligado excedió el tope de gastos del periodo de campaña de uno de sus candidatos postulado por candidatura común; por un monto de \$23,882.03."	\$23,882.03	Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$23,882.03 (veintitrés mil ochocientos ochenta y dos pesos 03/100 M.N.).	Se subsana	N/A	N/A
42.3 Partido de la Revolución Democrática					
17. "El sujeto obligado excedió el tope de gastos del periodo de campaña de uno de sus candidatos postulado por	\$23,882.03	Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias	Se subsana	N/A	N/A

Resolución INE/CG1122/2018			Acuerdo por el que se da cumplimiento		
Conclusión	Monto Involucrado	Sanción	Conclusión	Monto Involucrado	Sanción
candidatura común; por un monto de \$23,882.03"		Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$23,882.03 (veintitrés mil ochocientos ochenta y dos pesos 03/100 M.N.).			

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

A C U E R D A

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado identificado con el número de Acuerdo **INE/CG1121/2018** y de la Resolución **INE/CG1122/2018**, aprobados en sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los Candidatos a los cargos de Diputados locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017- 2018, en el estado de Guerrero, relativa a los considerandos 42.1 y 42.3 correspondientes al Partido Acción Nacional y al Partido de la Revolución Democrática, respecto de las conclusiones 10 y 17 respectivamente, en los términos precisados en los Considerandos **5, 6 y 7** del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Infórmese a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente identificado como **SM-RAP-63/2018** y su acumulado **SCM-RAP-70/2018**.

TERCERO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

SCM-RAP-63/2018 y su acumulado SCM-RAP-70/2018

Dictamen aprobado mediante Acuerdo INE/CG1121/2018

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

ID	Observación Oficio: INE/UTF/D/A/32677/2018	Escrito de respuesta TESGRO/123/2018 con fecha del 15 de junio de 2018.	Análisis							Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió																						
			Rebase de Tope de Campaña							1_C10_P2	Rebase del tope de gastos de campaña.	Artículo 443, numeral 1, inciso f) de la LGIPE.																						
			Derivado de las operaciones realizadas en periodo de corrección dos candidatos rebasaron el tope de gastos de campaña como se muestra en el siguiente cuadro:							El sujeto obligado excedió el tope de gastos del periodo de campaña de uno de sus candidatos postulado por candidatura común; por un monto de \$23,882.03.																								
			<table><tr><th>Candidato</th><th>ID Contabilidad</th><th>Sujeto obligado</th><th>Municipio</th><th>Gastos en IC</th><th>Total de gasto reportado</th><th>Tope de campaña</th><th>Diferencia entre el Tope de Gastos de Campaña</th></tr><tr><td rowspan="2">Elfin Ángel Romero Solís</td><td>59026</td><td>Partido Acción Nacional</td><td rowspan="2">59- Tepehuan</td><td>\$87,001.82</td><td rowspan="2">\$276,279.46</td><td rowspan="2">\$252,387.43</td><td rowspan="2">\$23,882.03</td></tr><tr><td>48340</td><td>Partido Acción Nacional Democrática</td><td>\$189,277.64</td></tr></table>							Candidato	ID Contabilidad	Sujeto obligado	Municipio	Gastos en IC	Total de gasto reportado	Tope de campaña	Diferencia entre el Tope de Gastos de Campaña	Elfin Ángel Romero Solís	59026	Partido Acción Nacional	59- Tepehuan	\$87,001.82	\$276,279.46	\$252,387.43	\$23,882.03	48340	Partido Acción Nacional Democrática	\$189,277.64						
Candidato	ID Contabilidad	Sujeto obligado	Municipio	Gastos en IC	Total de gasto reportado	Tope de campaña	Diferencia entre el Tope de Gastos de Campaña																											
Elfin Ángel Romero Solís	59026	Partido Acción Nacional	59- Tepehuan	\$87,001.82	\$276,279.46	\$252,387.43	\$23,882.03																											
	48340	Partido Acción Nacional Democrática		\$189,277.64																														

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

ID	Observación Oficio: INE/UT/DA/32638/2018	Escrito de respuesta CEEPRD/SF/031/2018 con fecha del 15 de junio de 2018	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
34	<p>Visitas de Verificación.</p> <p>Casa de Campaña.</p> <p>De la evidencia obtenida en las visitas de verificación a casas de campaña, se observaron gastos que el sujeto obligado omitió reportar en los informes. Lo anterior se detalla en el Anexo_18_Obs_17.</p> <p>Se solicita presentar en el SIF, lo siguiente:</p> <p>En caso que los gastos hayan sido realizados por el sujeto obligado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El o los comprobantes que amparen los gastos efectuados con todos los requisitos establecidos en la normativa. • Las evidencias del pago y en caso de que éstos hubiesen excedido lo equivalente a 90 LUMA, las copias de los cheques correspondientes con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". • El o los contratos de arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de servicios, debidamente requisitados y firmados. • El o los avisos de contratación respectivos. <p>En caso de que correspondan a aportaciones en especie:</p>	<p>(...)</p> <p>Respuesta: los municipios de Coyuca, Chilapa y Tecomanapa registraron debidamente los gastos mencionados en la observación, soportados correctamente con la evidencia documental que avala cada uno de los mismos ubicados en la contabilidad de cada sujeto obligado.</p> <p>(...)"</p> <p>Véase Anexo R2_P2 del presente dictamen.</p>	<p>No atendida.</p> <p>Del análisis y revisión al SIF y a la respuesta presentada por el sujeto obligado, se constató que omitió registrar algunos gastos relacionados con la operación de las casas de campaña, como se detalla en el Anexo_3_P1 y como a continuación se detalla:</p> <p>En los casos señalados con (1) en el Anexo 3_P1 con ID Contabilidad 48275, Ticket 120708, el sujeto obligado presentó el registro de los gastos relacionados con la operación de las casas de campaña, con la totalidad de los requisitos que establece la normativa, por tal razón esta observación quedo atendida.</p> <p>ID 48305, Ticket 122501, el sujeto obligado presentó el registro de los gastos relacionados con la operación de las casas de campaña, con la totalidad de los requisitos que establece la normativa, por tal razón esta observación quedo atendida.</p> <p>En los casos señalados con (2) en el Anexo 3_P1 con ID 48337, Ticket 126367 Esta autoridad no identifico ningún hallazgo registrado en la contabilidad del sujeto obligado, tales como 1 bodaña, 1 barda, 2 equipo de cómputo, 1 regulador de corriente, 1 impresora, 200 calcomanías con lema por el municipio que todos anhelamos, al no tener certeza para conciliar, esta observación quedo no atendida.</p> <p>ID 48340, Ticket 125687 Aun cuando el sujeto obligado en su oficio de respuesta adjunta un escrito del C. Efrén Ángel Romero Sotelo, en donde manifiesta no reconocer el gasto, este se encuentra en el Acta de Verificación Casa de Campaña con el número de Ticket que antecede a esta anotación.</p>	<p>3_C10_P1</p> <p>El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de 15 hallazgos de visitas de verificación de casa campaña y por un monto de \$67,723.58.</p>	<p>Egreso no reportado.</p>	<p>Artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP y 127 del RF</p>

<ul style="list-style-type: none"> • El o los recibos de aportación con la totalidad de requisitos establecidos en la normativa. • El o los contratos de donación o comodato debidamente requisitados y firmados. • El control de folios que establece el RF, en donde se identifiquen los recibos utilizados, cancelados y pendientes de utilizar. • Dos cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por cada aportación realizada. • Evidencia de la credencia para votar de los aportantes. <p>En caso de una transferencia en especie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los contratos de donación o comodato, debidamente requisitados y firmados. • Factura o cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por el inmueble otorgado en comodato. • El recibo interno correspondiente. <p>En todos los casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El registro del ingreso y gasto en su contabilidad. • El informe de campaña con las correcciones. • La evidencia fotográfica de los gastos observados. • Las aclaraciones que a su derecho conengan. <p>Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, numeral 1; 56,</p>			<p>en cuanto a los hallazgos esta autoridad no identifico ningún hallazgo registrado en la contabilidad del sujeto obligado, de los citados tales como 1 Equipo de Cómputo: Computadora Marca A cer Negra, 500 Carteles genéricos del partido, con lema Juntos Construimos un México más justo y digno. 100 Calcomanías de la Candidata Azucena Salazar, 4 Sillas de plástico color verdes, 60 Volantes: Calcomanías de Bety Mojica, 10000 Volantes (Volantes de la Candidata Beatriz Mojica 7000 y Volantes de las dos Candidatas Azucena Salazar y Bety Mojica 3000 con el lema para todos una nueva oportunidad). 6000 Volantes de la Candidata Azucena Salazar Candidata a Diputada Federal, 1 Escritorios de metal, 1 Impresora Marca Samsung, al no tener certeza para conciliar, esta observación quedo no atendida.</p> <p>La respuesta del sujeto obligado se considera insatisfactoria, toda vez que las observaciones no fueron solventadas en su totalidad, por tal razón la observación queda no atendida.</p> <p>Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado en beneficio de sus candidatos, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF descrito en el apartado correspondiente del presente dictamen.</p> <p>Identificación del costo para valuación en la Matriz de Precios (Pesos)</p> <table> <tr> <th>Id matr iz de prec ios</th><th>Proveedor</th><th>Concepto</th><th>Unid ad de medi da</th><th>Imp orte con N/A</th></tr> <tr> <td>180 8</td><td>PABLO ABNER SALAZAR MENDIGUCHIA</td><td>ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CALL CENTER</td><td>SER VICI O</td><td>\$5,800.00</td></tr> <tr> <td>113 61</td><td>ANGEL MORALES UGALDE</td><td>EQUIPO DE SONIDO</td><td>SER VICI O</td><td>4,640.00</td></tr> </table>	Id matr iz de prec ios	Proveedor	Concepto	Unid ad de medi da	Imp orte con N/A	180 8	PABLO ABNER SALAZAR MENDIGUCHIA	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CALL CENTER	SER VICI O	\$5,800.00	113 61	ANGEL MORALES UGALDE	EQUIPO DE SONIDO	SER VICI O	4,640.00	
Id matr iz de prec ios	Proveedor	Concepto	Unid ad de medi da	Imp orte con N/A															
180 8	PABLO ABNER SALAZAR MENDIGUCHIA	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CALL CENTER	SER VICI O	\$5,800.00															
113 61	ANGEL MORALES UGALDE	EQUIPO DE SONIDO	SER VICI O	4,640.00															

numerales 3, 4 y 5; 63, 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la LGPP; 26, numeral 1, inciso a); 33, numeral 1, inciso i); 37, 38, 46, numeral 1; 74, numeral 1; 96, numeral 1; 105, 106, 107, numerales 1 y 3; 126, 127 y 245, del RF.			<table><tr><td>522 8</td><td>BEATRIZ MOJICA MORGA</td><td>MOBILIARIO (SILLAS)</td><td>SER VICIO</td><td>5.80</td></tr><tr><td>763 4</td><td>RODOLFO QUINTANA TRUJILLO</td><td>UTILERIA PROMOCIO NAL (CALCOMAN IAS)</td><td>PIEZ AS</td><td>41.7 6</td></tr><tr><td>107 87</td><td>LILIA - ARMINDA GARCIA ESCOBAR</td><td>VOLANTES</td><td>PIEZ AS</td><td>1.13 1.00</td></tr><tr><td>510 7</td><td>TRANSFORMAND O GUERRERO</td><td>BARDAS</td><td>SER VICIO</td><td>141. 78</td></tr></table> <p><i>Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen Consolidado la matriz de precios correspondiente a la entidad.</i></p> <p>La determinación del costo se presenta en el anexo II-A, "Visitas de verificación eventos - Directo" Cons.7 al 21.</p> <p>De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar 15 hallazgos de las visitas de verificación a eventos valuados en \$67,723.58</p> <p>Asimismo, de las evidencias de las visitas se constató que dichos hallazgos de internet beneficiaron a los candidatos siguientes:</p> <table><tr><th>Nombre</th><th>ID de Contador</th><th>Rubro</th><th>Beneficio de Conformidad al Prorrato</th></tr><tr><td>TOMAS</td><td>48</td><td>VISITAS</td><td></td></tr><tr><td>MENESES</td><td>33</td><td>DE VERIFICACION A EVENTOS</td><td>\$32,549.78</td></tr><tr><td>CHAVEZ</td><td>7</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ARMENDIZABAL</td><td>48</td><td>VISITAS</td><td></td></tr><tr><td>ÁNGEL</td><td>34</td><td>DE VERIFICACION A EVENTOS</td><td>\$35,173.80</td></tr><tr><td>ROMERO</td><td>0</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SOTELO</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>\$67,723.58</td></tr></table> <p>El prorrato se detalla en el anexo II-A, "Visitas de verificación eventos - Directo" Cons. 7 al 21</p> <p>De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar hallazgos valuados en \$67,723.58</p>	522 8	BEATRIZ MOJICA MORGA	MOBILIARIO (SILLAS)	SER VICIO	5.80	763 4	RODOLFO QUINTANA TRUJILLO	UTILERIA PROMOCIO NAL (CALCOMAN IAS)	PIEZ AS	41.7 6	107 87	LILIA - ARMINDA GARCIA ESCOBAR	VOLANTES	PIEZ AS	1.13 1.00	510 7	TRANSFORMAND O GUERRERO	BARDAS	SER VICIO	141. 78	Nombre	ID de Contador	Rubro	Beneficio de Conformidad al Prorrato	TOMAS	48	VISITAS		MENESES	33	DE VERIFICACION A EVENTOS	\$32,549.78	CHAVEZ	7			ARMENDIZABAL	48	VISITAS		ÁNGEL	34	DE VERIFICACION A EVENTOS	\$35,173.80	ROMERO	0			SOTELO				TOTAL			\$67,723.58				
522 8	BEATRIZ MOJICA MORGA	MOBILIARIO (SILLAS)	SER VICIO	5.80																																																											
763 4	RODOLFO QUINTANA TRUJILLO	UTILERIA PROMOCIO NAL (CALCOMAN IAS)	PIEZ AS	41.7 6																																																											
107 87	LILIA - ARMINDA GARCIA ESCOBAR	VOLANTES	PIEZ AS	1.13 1.00																																																											
510 7	TRANSFORMAND O GUERRERO	BARDAS	SER VICIO	141. 78																																																											
Nombre	ID de Contador	Rubro	Beneficio de Conformidad al Prorrato																																																												
TOMAS	48	VISITAS																																																													
MENESES	33	DE VERIFICACION A EVENTOS	\$32,549.78																																																												
CHAVEZ	7																																																														
ARMENDIZABAL	48	VISITAS																																																													
ÁNGEL	34	DE VERIFICACION A EVENTOS	\$35,173.80																																																												
ROMERO	0																																																														
SOTELO																																																															
TOTAL			\$67,723.58																																																												
35	Eventos	No atendida	3_C11_P1	Egreso reportado	Artículos 79.																																																										

De la evidencia obtenida en las visitas de verificación a eventos públicos, se observaron diversos gastos que no fueron reportados en los informes. Lo anterior se detalla en el Anexo. 19. Obs. 18. Se solicita presentar en el SIF, lo siguiente: En caso que los gastos hayan sido realizados por el sujeto obligado:	Respuesta: los municipios mencionados en la observación reportaron oportunamente los gastos, mismos que se encuentran debidamente registrados y soportados con la documentación comprobatoria correspondiente a cada uno en la contabilidad de cada sujeto obligado. (...)" Véase Anexo R2_P2 del presente dictamen.	Del análisis a la respuesta del sujeto obligado y a los registros realizados en la etapa de corrección, en el SIF, se constató que omitió reportar gastos durante los eventos públicos en los cuales se llevaron a cabo visitas de verificación, como se detalla a continuación: En Ticket 151495 Esta autoridad no identificó los siguientes hallazgos 1 banda, 1 inmueble del evento, 6 Banderas, 2 Equipo de sonido y 150 sillas color blancas, por tal razón la observación no queda atendida. En Ticket 151496 Esta autoridad no identificó los siguientes hallazgos 1 banda, 4 banderas del PRD y Beatriz Mojica, 1 Equipo de sonido, y 180 sillas de plástico color blanco, por tal razón la observación no queda atendida. El ID 48275 Ticket 182715 esta autoridad no identificó los siguientes hallazgos 1 Inmueble donde se llevó a cabo el evento, 1 Equipo de sonido, 15 Gallardetes, 2 mesas y 400 sillas de plástico, por tal razón la observación no queda atendida. En ID 48340 Ticket 125532 esta autoridad no identificó los siguientes hallazgos 100 Alimentos: Alimentos para 100 personas y aguas frescas, 1 Equipo de Sonido: 4 Bocinas color negras, 1 micrófono y 1 amplificador, 250 Sillas: Sillas color negras, doblables, Por tal razón la observación no queda atendida. En ID 48340 Ticket 181826 esta autoridad no identificó los siguientes hallazgos 1 Equipo de Sonido: 27 Bocinas Negras, Por tal razón la observación no queda atendida. Atendida En la ID 48275, Ticket 121225.- Esta autoridad identificó los hallazgos con la totalidad de requisitos que establece la normativa, por tal razón la observación quedo atendida.	El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados 20 hallazgos por concepto de gastos en eventos públicos y por un monto de \$73,944.55.	numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP y 127 del RF
---	---	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Dos cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por cada aportación realizada. • Evidencia de la credencia para votar de los aportantes. <p>En caso de una transferencia en especie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los contratos de donación o comodato, debidamente requisitados y firmados. • Factura o cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por el inmueble otorgado en comodato. • El recibo interno correspondiente. <p>En todos los casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El registro del ingreso y gasto en su contabilidad. • El informe de campaña con las correcciones. • La evidencia fotográfica de los gastos observados. • Las aclaraciones que a su derecho convengan. <p>Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i); 54, numeral 1, 55, numeral 1, 56, numerales 3, 4 y 5; 61, numeral 1, inciso f); fracción III; 63, 79, numeral 1, inciso b); fracción I, de la LGPP; 26, numeral 1, inciso a); 33, numeral 1, inciso i); 37, 38, 46, numeral 1; 47, numeral 1, inciso a); 74, 96, numeral 1; 105, 106, 107, numerales 1 y 3; 126, 127, 143 Bis, 199, numeral 4, inciso a); 237, 243 y 245 del RF.</p>		<p>En Ticket 125021 Esta autoridad identificó los hallazgos con la totalidad de requisitos que establece la normativa, por tal razón la observación queda atendida.</p> <p>En ID 48340 Ticket 119133 Esta autoridad identificó los hallazgos con la totalidad de requisitos que establece la normativa, por tal razón la observación quedo atendida.</p> <p>ID 48311 Ticket 184253 Esta autoridad constató que el sujeto obligado no identificó los siguientes hallazgos 1 Banda de Viento, 5 Banderines de 1x1; por tal razón la observación quedo atendida</p> <p>La respuesta del sujeto obligado se considera insatisfactoria, toda vez que las observaciones no fueron solventadas en su totalidad, por tal razón la observación no quedo atendida.</p> <p>Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado en beneficio de sus candidatos, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF descrito en el apartado correspondiente del presente dictamen.</p> <p>Identificación del costo para valuación en la Matriz de Precios (Pesos)</p> <table> <tr> <th>Id matriz de precios</th><th>Proveedor</th><th>Concepto</th><th>Unidad de medida</th><th>Importe neto con IVA</th></tr> <tr> <td>2832</td><td>MARTI BAYRES GARCARRA MA</td><td>ALQUILER DE INMUEBLE (INMUEBLE)</td><td>SERVICIO</td><td>8,700.00</td></tr> <tr> <td>5106</td><td>JOSE MANUEL ASPIRUA ROMERO</td><td>UTILLERIA TEXTIL (BANDERA)</td><td>PIEZAS</td><td>150.00</td></tr> <tr> <td>11361</td><td>ANGEL MORALES UGALDE</td><td>EQUIPO SONIDO</td><td>SERVICIO</td><td>4,640.00</td></tr> </table>	Id matriz de precios	Proveedor	Concepto	Unidad de medida	Importe neto con IVA	2832	MARTI BAYRES GARCARRA MA	ALQUILER DE INMUEBLE (INMUEBLE)	SERVICIO	8,700.00	5106	JOSE MANUEL ASPIRUA ROMERO	UTILLERIA TEXTIL (BANDERA)	PIEZAS	150.00	11361	ANGEL MORALES UGALDE	EQUIPO SONIDO	SERVICIO	4,640.00	
Id matriz de precios	Proveedor	Concepto	Unidad de medida	Importe neto con IVA																				
2832	MARTI BAYRES GARCARRA MA	ALQUILER DE INMUEBLE (INMUEBLE)	SERVICIO	8,700.00																				
5106	JOSE MANUEL ASPIRUA ROMERO	UTILLERIA TEXTIL (BANDERA)	PIEZAS	150.00																				
11361	ANGEL MORALES UGALDE	EQUIPO SONIDO	SERVICIO	4,640.00																				

5228	BEATRIZ MOJICA MORGA	MOBILIARIO (SILLAS)	SER VICIO	5.80
5188	MA DE LOS ANGELES SALAMON GALENA	ANIMADORES DE (BANDA VIENTO)	SER VICIO	\$23. 20.0 0
1555 8	N/A	BEBIDAS (AGUAS EMBOTELLADAS)	PIEZ A	11.6 0
5241	SOLEDAD ESPERO ESPIÑAL	ALIMENTOS	PLAT ILLO	98.6 0
5227	MERCED BALDOVINO DIEGO	UTILERIA TEXTIL (BANDERINES)	PIEZ A	8.11
1025 3	EMILIO MONTERO PEREZ	MANTAS	PIEZ A	150. 00
5050	BRIGIDA ROSA MARIA TRAN TORRALVA	MOBILIARIO (TEMPLETE)	SER VICIO	12.7 60.0 0
1198 2	JOSE ANTONIO MEJIA LIRA	UTILERIA PROMOCIONAL (GALLARDETE)	PIEZ A	150. 80
5227	COORDINADORA TINO DEBATA SA DE CV	UTILERIA TEXTIL	PIEZ A	8.11
N/A	MERCADO LIBRE	TABLEROS PLEGABLES NEGOCIO PROPIO EVENTOS ALQUILADORA	PIEZ A	1.19 9.00

Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen Consolidado la matriz de precios correspondiente a la entidad.

La determinación del costo se presenta en el anexo II-A, "Visitas de verificación eventos - Directo" Cons. 1 al 5.

De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar 20 hallazgos de las visitas de verificación a eventos valuados en **\$73,944.55**

Asimismo, de las evidencias de las visitas se constató que dichos hallazgos de internet beneficiaron a los candidatos siguientes:

Gastos no reportados aprobados mediante Acuerdo INE/CG1121/2018					
Procedimiento mediante el que se detectó	Partido Político	Núm. de conclusión	Concepto de gasto no reportado	Monto valuado	Referencia
Visitas de verificación	CC PRD	3_C10_P1	Volantes	2,505.60	2
			Volantes	11,300.00	2
			Volantes	6,780.00	2
			Bocina	4,640.00	1
			Bardas (fachada de la casa de campana)	141.78	2
			4 Sillas	23.20	4
			1 escritorio de metal	1,730.00	4
			1 Impresora	1,144.00	4
			1 Equipo de cómputo	5,800.00	4
			Equipo de sonido: 4 Bocinas color negras, 1 micrófono y 1 amplificador	4,640.00	1
Monitoreo de Radio y TV Prorrateo		3_C11_P1	Equipo de sonido: 27 Bocinas Negras	4,640.00	3
			100 porciones de Alimentos	9,860.00	4
			250 sillas	1,450.00	4
			Monitoreo de Spots de Radio y TV Prorrateo	8,079.06	4

Por lo que respecta a los gastos señalados con 1 en la columna "Referencia" del cuadro que antecede, de la verificación al SIF se constató que se encuentran reportados en la póliza PN1/DR12/30-06-18 de la contabilidad del candidato; por tal razón, la observación **quedó atendida**.

Referente a los gastos señalados con 2 en la columna "Referencia" del cuadro que antecede, de la verificación al SIF se constató que corresponden a gastos que benefician a la candidata a Senadora Beatriz Mojica Morga, a la candidata a Diputada Federal Azucena Salazar, así como al candidato a Presidente Municipal, Tomas Meneses Chávez; mismos que fueron reportados en las pólizas PN2/PD13/08-05-18; PN3/PD3/01-06-18 y PC1/PD1/13-07-18 respectivamente y acumulados a los informes correspondientes, por lo que al no existir beneficio para el otra candidato Efrén Ángel Romero Sotelo los gastos no fueron acumulados en su informe de campaña; por tal razón, la observación **quedó sin efecto**.

Respecto al gasto señalado con 3 en la columna “Referencia” del cuadro que antecede, se observó que se encuentra duplicado, toda vez que ya había sido objeto de observación en la conclusión 3_C10_P1; por tal razón la observación **quedó sin efectos**.

Finalmente, los gastos señalados con 4 en la columna “Referencia” del cuadro que antecede, se constató que no se encuentran reportados en la contabilidad del candidato, por lo que el monto determinado inicialmente no se modifica; quedando de la siguiente manera:

Procedimiento mediante el que se detectó	Partido Político	Núm. de conclusión	Concepto de gasto no reportado	Monto valuado
Visitas de verificación	CC PRD	3_C10-P1	4 Sillas	23.20
			1 Escritorio de metal	1,730.00
			1 Impresora	1,144.00
			1 Equipo de cómputo*	5,800.00
		3_C11-P1	100 porciones de Alimentos	9,860.00
Monitoreo de Radio y TV Prorratio		3_C9_P1	250 Sillas	1,450.00
			*Monitoreo de Spots de Radio y TV Prorratio	2,423.72
			Total	\$22,430.92

*La determinación del prorratio de los spots de radio y tv se detalla en el Anexo 2 del presente acatamiento.

Del análisis antes señalado, se determinó en el Anexo 3, que acumulando los gastos no reportados al informe de campaña del otrora candidato Efrén Ángel Romero Sotelo, no se configura el rebase de topes como se detalla a continuación:

Concepto	Reportado	No reportado	Total reportado y no reportado	Tope de gasto	Diferencia del tope	% del gasto total respecto al tope
Gastos						
CC PRD	\$120,744.00	\$22,430.92	\$143,174.92			
CC PAN	87,001.82	0.00	87,001.82			
Total gastos	\$207,745.82	\$22,430.92	\$230,176.74	\$252,397.43	\$22,220.69	91.20%

Por los argumentos expuestos anteriormente, quedan sin efectos las conclusiones 10 del Partido Acción Nacional y 17 del Partido de la Revolución Democrática, relativas al rebase de tope de gastos del C. Efrén Ángel Romero Sotelo.

Distribución conforme al Anexo 2 del III RF																
Monto a promover		Presidencia 18%		Senador/ 35%		Deputado Federal 25%		Candidato Local 25%								
		\$	138,000.00	\$	20,750.00	\$	48,300.00	\$	34,500.00	\$	34,500.00					
PROCESO	AMBITO	ESTADO ELECCION	PROCESO ELECTORAL	ESTADO ELECCION	SUBVENCION ENTIDAD	CONTABILIDAD	CARGO	SUJETO OBLIGADO	SIGLAS	TIPO ASOCIACION	RFC	NOMBRE CANDIDATO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	TORNO DE GASTOS	IMPORTE ESTIMADO DEL PROCESO
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-GRO-01 JUL 2018	GUERRERO	GUERRERO	Municipio 28-CHILAPA DE ALVAREZ	48305	PRESIDENTE MUNICIPAL	PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	PRD	C	HEG6410902V6	ANTONIO	HERNANDEZ	GOMEZ	\$ 572,050.88	\$ 5,493.28
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-GRO-01 JUL 2018	GUERRERO	GUERRERO	Municipio 19-COPALLILLO	48310	PRESIDENTE MUNICIPAL	PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	PRD	C	ROL640516Z51	BERNARDO	ROSAS	LIÑARES	\$ 72,676.85	\$ 697.90
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-GRO-01 JUL 2018	GUERRERO	GUERRERO	Municipio 42-MALINALTEPEC	48307	PRESIDENTE MUNICIPAL	PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	PRD	C	LOH67105010F3	EFREN	LOPEZ	HERNANDEZ	\$ 123,360.53	\$ 1,184.80
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-GRO-01 JUL 2018	GUERRERO	GUERRERO	Municipio 59-TEOLOAPAN	48340	PRESIDENTE MUNICIPAL	PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	PRD	CC	ROSE760200Z628	EFREN ANGEL	ROMERO	SOTELO	\$ 252,397.43	\$ 2,423.70
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-GRO-01 JUL 2018	GUERRERO	GUERRERO	Municipio 22-COYUCA DE CATALAN	48275	PRESIDENTE MUNICIPAL	PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	PRD	C	EET6501020H18	EUSEBIO	ECHIVERRIA	TABARES	\$ 216,300.70	\$ 2,077.09
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-GRO-01 JUL 2018	GUERRERO	GUERRERO	Municipio 2-AHUACOTZINGO	48338	PRESIDENTE MUNICIPAL	PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	PRD	C	CAN6710300J06	GLORINDA	CASARUBIAS	NAVA	\$ 119,596.47	\$ 1,148.46
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-GRO-01 JUL 2018	GUERRERO	GUERRERO	Municipio 18-COPALA	48311	PRESIDENTE MUNICIPAL	PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	PRD	CC	GAV6811212H23	GUADALUPE	GARCIA	VILLALBA	\$ 68,927.31	\$ 661.89
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-GRO-01 JUL 2018	GUERRERO	GUERRERO	Municipio 43-MARTIN DE CUILAPAN	48300	PRESIDENTE MUNICIPAL	PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	PRD	C	GOO6811128118	JENNY	GONZALEZ	OCAIMPO	\$ 87,026.28	\$ 855.89
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-GRO-01 JUL 2018	GUERRERO	GUERRERO	Municipio 13-AZDZUYU	48316	PRESIDENTE MUNICIPAL	PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	PRD	C	BAV15405027B7	LETICIA	BAUTISTA	VARGAS	\$ 74,624.98	\$ 716.61
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-GRO-01 JUL 2018	GUERRERO	GUERRERO	Municipio 40-JUAN R. ESCUDERO	48304	PRESIDENTE MUNICIPAL	PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	PRD	C	CIG17804120T77	LOURDES	OPRIANA	GARCIA	\$ 119,244.97	\$ 1,145.08
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-GRO-01 JUL 2018	GUERRERO	GUERRERO	Municipio 10-ATLIXTAC	48313	PRESIDENTE MUNICIPAL	PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	PRD	C	RUEM700023H44	MARCELINO	RUIZ	ESTEBAN	\$ 113,839.82	\$ 1,093.18
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-GRO-01 JUL 2018	GUERRERO	GUERRERO	Municipio 41-LEONARDO BRAVO	48315	PRESIDENTE MUNICIPAL	PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	PRD	C	JDM6602251W4	MARIA	JIMENEZ	DAZ	\$ 116,638.56	\$ 1,120.06
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-GRO-01 JUL 2018	GUERRERO	GUERRERO	Municipio 77-JOSE JOAQUIN DE HERRERA	48301	PRESIDENTE MUNICIPAL	PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	PRD	C	HECM610525JK3	MARIA MAGDALENA	HERNANDEZ	CARBALLO	\$ 66,221.41	\$ 635.91
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-GRO-01 JUL 2018	GUERRERO	GUERRERO	Municipio 17-COCULA	48286	PRESIDENTE MUNICIPAL	PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	PRD	C	CACM640207160	MARCELA	CASTRO	CHAVARRITA	\$ 76,965.40	\$ 759.08
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-GRO-01 JUL 2018	GUERRERO	GUERRERO	Municipio 32-GENERAL CANUTO A. NERI	48339	PRESIDENTE MUNICIPAL	PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	PRD	C	ROMM650312B70	MARTHA ORALIA	RODRIGUEZ	MARTINEZ	\$ 30,976.49	\$ 297.48
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-GRO-01 JUL 2018	GUERRERO	GUERRERO	Municipio 64-TLACOPA	48274	PRESIDENTE MUNICIPAL	PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	PRD	C	ROSMT91228UV2	MARTIN	ROSALES	SIERRA	\$ 42,908.19	\$ 412.04
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-GRO-01 JUL 2018	GUERRERO	GUERRERO	Municipio 44-METLATONOC	48308	PRESIDENTE MUNICIPAL	PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	PRD	C	OHM820595UL6	MATIAS	ORTIZ	RODRIGUEZ	\$ 85,627.62	\$ 822.26
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-GRO-01 JUL 2018	GUERRERO	GUERRERO	Municipio 38-XICATEPECAN DE CUAHUITEMOC	48297	PRESIDENTE MUNICIPAL	PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	PRD	C	CANM760104CX0	NAUCELIA	CASTILLO	BAUTISTA	\$ 34,783.31	\$ 334.04
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-GRO-01 JUL 2018	GUERRERO	GUERRERO	Municipio 64-PAXTLA	48314	PRESIDENTE MUNICIPAL	PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	PRD	C	PNM650426UP9	NOEMI	PIÑEDA	SALGADO	\$ 52,015.48	\$ 499.49
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-GRO-01 JUL 2018	GUERRERO	GUERRERO	Municipio 48-PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS	48276	PRESIDENTE MUNICIPAL	PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	PRD	C	SAANT70122LE6	NORMA	SANCHEZ	ALVAREZ	\$ 33,133.92	\$ 318.18
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-GRO-01 JUL 2018	GUERRERO	GUERRERO	Municipio 26-CUETZALA DEL PROGRESO	48312	PRESIDENTE MUNICIPAL	PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	PRD	C	NAC08601020M4	OLIVIA	NAJERA	CATALAN	\$ 41,351.08	\$ 397.09
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-GRO-01 JUL 2018	GUERRERO	GUERRERO	Municipio 37-AGUALAPA	48306	PRESIDENTE MUNICIPAL	PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	PRD	C	GOAO750607486	OMAR	GONZALEZ	ALVAREZ	\$ 53,360.00	\$ 512.40
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-GRO-01 JUL 2018	GUERRERO	GUERRERO	Municipio 76-ACATEPEC	48303	PRESIDENTE MUNICIPAL	PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	PRD	C	CANM741126J06	RAMIRO	SALVADOR	HERNANDEZ	\$ 132,344.24	\$ 1,270.87
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-GRO-01 JUL 2018	GUERRERO	GUERRERO	Municipio 57-TECOXANAPA	48337	PRESIDENTE MUNICIPAL	PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	PRD	C	MECT740301UM4	TOMAS	MENESES	CHAVEZ	\$ 202,723.08	\$ 1,946.71
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-GRO-01 JUL 2018	GUERRERO	GUERRERO	Distrito 20-TEOLOAPAN	49189	DEPUTADO LOCAL MR	PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	PRD	CC	UIPT6716103TMA	ROSELL	URIOSTEGUI	PATINO	\$ 803,587.70	\$ 7,716.68
															\$	\$ 34,500.00

Nota (*) El monto se encuentra integrado en la columna "Gastos en IC según Anexo II"

INE/CG1263/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SCM-RAP-65/2018

A N T E C E D E N T E S

I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. El seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado **INE/CG1165/2018** y la resolución **INE/CG1166/2018**, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Puebla.

II. Recurso de apelación. Inconforme de las sanciones impuestas por el **Consejo General del Instituto Nacional Electoral**, el diez de agosto del dos mil dieciocho, el Partido de la Revolución Democrática presentó recurso de apelación para controvertir la parte conducente del Dictamen Consolidado y resolución antes mencionados, mismo recurso que fue radicado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en la Ciudad de México (en adelante, Sala Regional) el quince de agosto del año dos mil dieciocho, quedando registrado bajo el número de expediente **SCM-RAP-65/2018**.

III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, en sesión pública celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, la Sala Regional resolvió el recurso referido, determinando lo que a la letra se transcribe:

*“**ÚNICO.** Se **revoca parcialmente** la **RESOLUCIÓN IMPUGNADA** para los efectos precisados en la parte final del presente fallo.”*

IV. Derivado de lo anterior, en la ejecutoria antes citada se revocó el Dictamen Consolidado y la resolución impugnada, únicamente respecto del Considerando **36.3**, inciso **d)** conclusión **3_C9_P1**, del Resolutivo **TERCERO** de la citada Resolución, toda vez que a juicio de la Sala Regional asiste parcialmente la razón al Partido de la Revolución Democrática, pues de los 830 (ochocientos treinta) eventos políticos de candidaturas, cuyos registros fueron efectuados posteriormente a su realización, 170 (ciento setenta) de ellos corresponden a 44 (cuarenta y cuatro) candidaturas a presidencias municipales postuladas por otros partidos políticos en lo individual o en candidaturas comunes de las cuales aquel no formó parte, lo anterior se desprendió del acuerdo CG-AC-055/18, emitido el veinte de abril, por el Consejo General del Instituto Electoral de Puebla por el cual resolvió las solicitudes de registro de las diversas candidaturas a diputaciones y ayuntamientos presentadas para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, por lo que de conformidad con dicho acuerdo, el Partido de la Revolución Democrática **no registró** en lo individual ni en candidatura en común a las 44 (cuarenta y cuatro) personas candidatas a presidencias municipales, cuyos 170 (ciento setenta) eventos políticos fueron registrados de manera extemporánea y no deberán cuantificarse para efectos de la sanción de dicho partido político; por tal motivo, y de conformidad al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c), d), g) y o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de Acuerdo correspondiente.

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j), aa) y jj); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de los ingresos y egresos de los partidos políticos.

2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las

resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso, el Recurso de Apelación identificado con el número de expediente **SCM-RAP-65/2018**.

3. Que la Sala Regional resolvió revocar el Dictamen Consolidado **INE/CG1165/2018** y la Resolución **INE/CG1166/2018** en los términos referidos por el citado fallo, por lo que, a fin de dar debido cumplimiento a la sentencia de mérito, se procederá a atender a cabalidad las bases establecidas en la ejecutoria precisada.

4. En ese sentido, en el Considerando TERCERO del apartado de **ESTUDIO DE FONDO** de la ejecutoria dictada en el recurso de apelación identificado bajo el número de expediente **SCM-RAP-65/2018**, la Sala Regional determinó lo que a continuación se transcribe:

*“**TERCERO. Estudio de fondo.** El **PRD** expresa diversos agravios en contra de la **RESOLUCIÓN IMPUGNADA** y, específicamente, de las conclusiones del **DICTAMEN CONSOLIDADO** en las que se basaron las sanciones que le fueron impuestas, por lo cual, para una mejor comprensión del presente asunto, los agravios se analizarán conjuntamente por temas, lo que ningún perjuicio le ocasiona en tanto todos sean respondidos por esta Sala Regional.*

(...)

Sanciones por candidaturas que el PRD no postuló o fueron postuladas en candidatura común

*En términos generales, el **PRD** recurre la **RESOLUCIÓN IMPUGNADA** bajo el argumento de que el Consejo General del **INE** le impuso diversas sanciones por haber registrado eventos políticos con posterioridad a su realización, respecto de candidatos que –dice– no postuló o no le correspondía postularlas al ser candidaturas comunes, sin que –a su parecer– se haya analizado completa y debidamente la documentación reportada en el **SIF**.*

*Cinco son las conclusiones del **DICTAMEN CONSOLIDADO**, con base en las cuales se determinó imponer diversas sanciones al PRD en la **RESOLUCIÓN IMPUGNADA**, que en esta **APELACIÓN** son combatidas bajo los siguientes argumentos:*

Conclusiones según el DICTAMEN CONSOLIDADO		Argumentos en contra según el PRD
Número 1: 3_C9_P1	El sujeto obligado, registró 830 eventos políticos con posterioridad a su realización por lo cual no cumplieron con la antelación como establece la norma.	Que del Anexo 3_P1 se advierte que en 171 eventos políticos, el PRD no postuló candidaturas, las cuales son de otros partidos o de coaliciones y/o candidaturas comunes de las que no fue parte. Que del Anexo 10_P2 se advierte que en 263 eventos políticos el PRD sí postuló candidaturas, pero en candidatura común, sin ser responsable de las postulaciones, pues ello le correspondió hacerlo a otros partidos.
(...)		

En cada caso, el PRD refiere que el personal de la Secretaría de Finanzas de su Comité Ejecutivo Estatal en el Estado de Puebla, hizo de conocimiento al personal de la UTF la falsedad de la imputación por los motivos precisados, ante lo cual se le indicó que se tomaría en cuenta el acuerdo en que se aprobó el listado de candidaturas a los ayuntamientos.

Por ello, el PRD ahora refiere como agravio en su APELACIÓN una falta de análisis del contenido del Acuerdo CG/AC-055/18 emitido por el INSTITUTO DE PUEBLA, en que se resolvieron las solicitudes de registro de las diversas candidaturas a diputaciones locales y ayuntamientos presentadas por los partidos y coaliciones para el Proceso Electoral estatal ordinario 2017-2018.

(...)

Respuesta a los agravios

En principio, como puede desprenderse de la tabla anterior, los agravios expresados por el PRD, en los que combate las cinco conclusiones a través de las cuales el Consejo General del INE le impuso sendas sanciones por omitir registrar la información a que se refieren las mismas, o bien, por haberlo hecho de manera extemporánea, tienen como finalidad controvertir la RESOLUCIÓN IMPUGNADA desde dos perspectivas, al afirmar que en ambos casos, está exento de responsabilidad alguna, a saber:

1. Que **171** (ciento setenta y un) eventos políticos son de candidaturas que no postuló el **PRD**, mismas que – afirma– corresponden a otros partidos políticos en lo individual, o bien, a coaliciones y/o candidaturas comunes de las que no fue parte, y

2. Que en total **618** (seiscientos dieciocho) eventos políticos y **17** (diecisiete) casas de campaña, si bien corresponden a candidaturas que el propio **PRD** postuló, ello fue a través de la figura de la candidatura común que formó con otros partidos, sin que fuera su responsabilidad la postulación.

La primera de estas manifestaciones es **parcialmente fundada**.

Si bien la **UTF** (mediante oficio INE/UTF/DA/33302/18), requirió al **PRD** solventar las irregularidades relacionadas con el registro extemporáneo de eventos políticos, y, en respuesta a ello, dicho partido político (mediante oficio PRD/CEE/SF-028/18) no efectuó manifestación alguna con respecto al origen partidista de las candidaturas responsables de tales eventos, tal situación, a juicio de esta Sala Regional, no debió ser obstáculo o impedimento para que la autoridad electoral se percatara de ello previamente a concluir que su registro extemporáneo fue responsabilidad de ese partido.

En efecto, asiste parcialmente razón al **PRD**, pues de los **830** (ochocientos treinta) eventos políticos de candidaturas, cuyos registros fueron efectuados posteriormente a su realización, **170** (ciento setenta) de ellos corresponden a **44** (cuarenta y cuatro) candidaturas a presidencias municipales postuladas por otros partidos en lo individual o en candidaturas comunes de las cuales aquel no formó parte.

Lo anterior se desprende del acuerdo CG-AC-055/18, emitido el veinte de abril, por el Consejo General del **INSTITUTO DE PUEBLA**, por el cual resolvió las solicitudes de registro de las diversas candidaturas a diputaciones y ayuntamientos presentadas para el Proceso Electoral estatal ordinario 2017-2018, mismo que fue exhibido por el **PRD** con su **APELACIÓN**, así como por el Secretario Ejecutivo del Consejo General del **INE** en su informe circunstanciado, cuyo contenido constituye un hecho público y notorio para esta Sala Regional, al haberse publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintiocho de abril, y constar dicha publicación en copias certificadas en el expediente del juicio de revisión constitucional electoral SCMJRC-29/2018.

En efecto, de conformidad con dicho acuerdo, el **PRD** no registró en lo individual ni en candidatura común a las 44 (cuarenta y cuatro) personas candidatas a presidencias municipales, cuyos 170 (ciento setenta) eventos políticos fueron registrados de manera extemporánea según el contenido del anexo 3_P1 que

sustenta la conclusión 3_C9_P1 del DICTAMEN CONSOLIDADO, y por la cual el Consejo General del INE determinó sancionarlo.

A continuación, dichas 44 (cuarenta y cuatro) candidaturas a presidencias municipales se enlistarán en atención al partido o candidatura común que las postuló para el ayuntamiento respectivo, en las cuales no tuvo participación alguna el PRD.

	Personas candidatas a la presidencia municipal	Ayuntamientos del Estado de Puebla	Partidos políticos y/o candidaturas comunes que las postularon
1	Jorge Alejandro Pedraza Funez	Cuapixtla de Madero	MC/PAN
2	Maribel García Rodríguez	Cuapixtla de Madero	PAN
3	María de Lourdes Sánchez Vega	Cuapixtla de Madero	PRI
4	Jesús Hernández Ronquillo	Cuautempán	PCP
5	María Ylida Limón Bonilla	Cuautempán	PNA
6	Deysi Mendoza Cerezo	Cuautinchán	PCP
7	Felipe Bretón Tovar	Cuautlancingo	PSI/MC
8	María de los Ángeles Pérez Yllanes	Cuautlancingo	PRI
9	Gabriel palestino Ortiz	Cuautlancingo	PNA
10	Adriana López Patiño	Cuayuca de Andrade	PAN/MC
11	Fernando Antonio Mora Becerril	Cuetzalán del Progreso	MC
12	Carolina Dolores Carreón González	Cuetzalán del Progreso	PCP
13	Gerson Calixto Dattoli	Cuetzalán del Progreso	PRI
14	Jairo Ramón Tun Alvarado	Chalchicomula de Sesma	PNA
15	Eduardo González Cortés	Chalchicomula de Sesma	PCP
16	Víctor Manuel Bautista Paulino	Chalchicomula de Sesma	PRI
17	Alexandra Maribel Jiménez Flores	Chapulco	PAN
18	Javier Torres Barrera	Chiautla	PCP
19	Yolanda Andrés Cruz	Chiconautla	PCP
20	Bruno Lauro Montiel Hernández	Chichiquila	PNA
21	Angélica González Pinillos	Chichiquila	PSI
22	Pablo Galindo Hernández	Chichiquila	PRI
23	Héctor Herrera Rivera	Chietla	PNA
24	Juan Gutiérrez Briones	Chietla	MC
25	Oscar Paz Acevedo	Chietla	PSI
26	Leonardo Cabrera García	Chietla	PCP
27	Leticia Aguilar Hernández	Chignahuapan	PSI
28	Gaudencio Olvera Hernández	Chignahuapan	PNA

	Personas candidatas a la presidencia municipal	Ayuntamientos del Estado de Puebla	Partidos políticos y/o candidaturas comunes que las postularon
29	Alberto Rodríguez Paulino	Chignautla	PNA
30	Praxedis Rodríguez Lucas	Chignautla	PSI
31	Violeta Anaí Loyola Juárez	Chila	MC
32	Fabiola Osio Bravo	Chila	PCP
33	Rosalina Medel Tentle	Chilchota	PRI
34	Berenice Trujillo Cavanzo	Eloxochitlán	PCP
35	Margarita Castilla García	Epatlán	MC
36	José Guadalupe Huerta Morales	Esperanza	PRI
37	Juan Rogelio García Escudero	Francisco Z. Mena	PNA
38	María Dimpna Serrano Rivera General	Felipe Ángeles	PCP/PNA
39	Margarita López García	Huaquechula	PNA
40	Rafael Gutiérrez Alpizar	Huachinango	PCP/PVEM
41	Ma. del Socorro Rosales Hernández	Huehuetlán El Chico	PNA
42	Norberto Roldán Ariza	Huehuetlán El Chico	PCP/PAN
43	Julio César Lorenzini Rangel	San Pedro Cholula	MC/PAN
44	Rubén Percino Tlapaltotoli	San Pedro Cholula	PSI

Como puede verse de lo anterior, en parte asiste razón al PRD, pues indebidamente fue requerido por la UTF para solventar dichas irregularidades, cuando las mismas no le son imputables al no haber postulado a dichas personas como sus candidatas, razón por la cual también se estima incorrecto que el Consejo General del INE lo sancionara por el registro extemporáneo de los eventos políticos que aquellas llevaron a cabo.

Debido a ello, lo procedente es **revocar parcialmente** la conclusión 3_C9_P1, así como la sanción impuesta al **PRD** que en ella se basó, para los efectos que más adelante se precisarán.

Situación contraria acontece con María Norma Sonia Fuentes Rivera, candidata a presidenta municipal del Ayuntamiento de Guadalupe Victoria, pues según se advierte del referido acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto de Puebla, fue postulada en candidatura común por el PCP, PAN y PRD, por lo

que, como más adelante se explicará, este último es responsable del registro extemporáneo de los eventos políticos que aquella haya llevado a cabo.

(...)”

Asimismo, mediante el Considerando TERCERO, **de título: Sentido y efectos de la sentencia**, de la ejecutoria dictada en el recurso de apelación en comento, la Sala Regional determinó lo que a continuación se transcribe:

“Sentido y efectos de la sentencia.

*Por lo anterior, lo procedente es **revocar parcialmente** la conclusión 3_C9_P1 del **DICTAMEN CONSOLIDADO**, así como la sanción impuesta al **PRD** que en ella se basó el Consejo General del **INE** en la **RESOLUCIÓN IMPUGNADA**, para efectos de que dicha autoridad electoral, en un plazo de **veinte días naturales**, emita otra resolución en la que no considere los 170 (ciento setenta) eventos políticos a que se refiere este fallo y determine lo que en Derecho proceda con base en una nueva conclusión.*

Esto último en el entendido que las consideraciones que no fueron materia de impugnación en esta instancia federal, o bien, que ya fueron confirmadas en la presente Resolución por esta Sala Regional, deberán quedar intocadas.”

Lo anterior, a efecto de que esta autoridad emita una nueva determinación considerando lo expuesto por la Sala Regional, por lo que este Consejo General procederá a acatar la sentencia, para lo cual, en congruencia con el sentido de la ejecutoria de mérito, se realizaran las siguientes modificaciones al Dictamen Consolidado y resolución impugnada:

Conclusión	
Conclusión original 3_C9_P1	“El sujeto obligado, registró 830 eventos políticos con posterioridad a su realización por lo cual no cumplieron con la antelación como establece la norma.”
Efectos	Que la autoridad electoral reajuste la cuantificación de la sanción impuesta tomando en consideración la revocación parcial de la multa impuesta por virtud de la conclusión 3_C9_P1.

Conclusión	
Acatamiento	Toda vez que la Sala Regional estableció que el Partido de la Revolución Democrática, indebidamente fue requerido por la UTF para solventar irregularidades por 170 (ciento setenta) eventos, cuando las mismas no le son imputables al no haber postulado a 44 (cuarenta y cuatro) personas como sus candidatos, razón por la cual también se estimó incorrecto que el Consejo General del INE lo sancionara por el registro extemporáneo de los eventos políticos que aquellas llevaron a cabo, se revoca parcialmente la conclusión 3_C9_P1 para que en un plazo de veinte días naturales, se emita otra resolución en la que no se considere los 170 (ciento setenta) eventos políticos y determine lo que en Derecho proceda con base en una nueva conclusión.

5. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las condiciones socio económicas del ente infractor.

Bajo esta tesitura, debe considerarse que el partido político sujeto al procedimiento de fiscalización que cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que, en su caso, se les imponga, toda vez que mediante el Acuerdo CG/AC-039/17 emitido por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Puebla, se les asignó como financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2018, el monto siguiente:

Partido Político	Financiamiento público actividades ordinarias 2018
Partido de la Revolución Democrática	\$22,495,116.56

En este orden de ideas, y de acuerdo al criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es idóneo que esta autoridad considere, para efecto de la imposición de las sanciones que pudieran determinarse, la capacidad económica de los partidos políticos derivada del financiamiento público federal para actividades ordinarias¹.

¹ Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con financiamiento público local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin recursos económicos para llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente.

En razón de lo anterior, el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG339/2017, mediante el cual aprobó las cifras de financiamiento público de los Partidos Políticos Nacionales y gastos de campaña del conjunto de candidaturas independientes para el ejercicio dos mil dieciocho, determinando asignarles a los sujetos obligados que nos ocupan los montos siguientes:

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido mediante oficio INE/UTVOPL/6705/2018 el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales remitió el oficio IEE/PRE/3827/18 suscrito por el Lic. Jacinto Herrera Serrallonga, Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Puebla mediante el cual informó lo siguiente:

- Por lo que hace a al partido político que a continuación se señala, existen saldos pendientes por pagar:

En este sentido, el partido político cuenta con saldos pendientes por pagar, relativos a sanciones impuestas en diversos procedimientos administrativos sancionadores, conforme a lo que a continuación se indica:

PUEBLA						
ID	Partido Político	Resolución de la Autoridad	Monto total de la sanción	Montos de deducciones realizadas al mes de junio de 2018	Montos por saldar	Total
3	PRD	INE/CG341/2018	\$ 1,612.00 Multa	\$0.00	\$ 1,612.00	\$ 1,612.00

Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que el partido político con financiamiento local tiene la capacidad económica suficiente con la cual puede hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérsele en la presente Resolución.

En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente para el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político, pues aun y cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean establecidas conforme a la normatividad electoral.

Ahora bien, con la finalidad de no afectar las actividades ordinarias del partido político infractor, el pago de las sanciones económicas que en su caso se impongan se realizará en términos del Acuerdo **INE/CG61/2017**.

Esto es, las sanciones económicas impuestas con base en la capacidad económica estatal, deberán ejecutarse por el Organismo Público Local de la entidad federativa, para lo cual dicho organismo deberá considerar, en términos de lo dispuesto en el **Lineamiento Sexto, apartado B del Acuerdo INE/CG61/2017**, lo siguiente:

- Una vez que las sanciones impuestas por la autoridad electoral nacional queden firmes, sea por determinación de la autoridad jurisdiccional correspondiente o por que las mismas no hayan sido materia de impugnación, las sanciones se harán efectivas a partir del mes siguiente en que queden firmes.
- De conformidad con lo anterior, el Organismo Público Local deberá llevar el registro de las notificaciones realizadas a los sujetos obligados en la entidad federativa correspondiente, de las sanciones impuestas con cargo al financiamiento público estatal, en los formatos que para tal efecto proporcione la Dirección Jurídica de este Instituto, en cumplimiento del artículo Transitorio PRIMERO del Acuerdo INE/CG61/2017.

El área competente de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales informará a los Organismos las sanciones que hayan quedado firmes.

Para lo anterior, la Unidad Técnica de Vinculación deberá remitir oportunamente las constancias de notificación correspondientes a la Dirección Jurídica.

- Para la ejecución de las sanciones el Organismo Público Local deberá considerar un descuento económico que no puede exceder del 50% (cincuenta por ciento) del financiamiento público mensual que reciba el instituto político en la entidad para el desarrollo de sus actividades ordinarias.

Conforme lo anterior, el Organismo Público Local fijará las sanciones a ejecutar en el mes correspondiente; considerando en todo momento, que de existir un conjunto de sanciones firmes pendientes de cobro por un importe superior al 50% del financiamiento público del partido político, éstas deberán ser cobradas conforme al orden en que quedaron firmes, en el entendido que no podrá descontarse un importe menor al equivalente al porcentaje antes mencionado; por lo que de acuerdo al monto de sanción, podrá acumular para su ejecución el número de sanciones necesarias hasta que queden completamente pagadas.

- Las sanciones impuestas y cobradas con recursos provenientes del financiamiento público estatal deberán de ser destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en términos de las disposiciones aplicables, por lo que se estará a lo establecido en el resolutivo respectivo, en términos de lo dispuesto en el Lineamiento Sexto, Apartado B, numeral 2 del Acuerdo INE/CG61/2017.
- El Organismo Público Local verificará en el plazo de 15 días hábiles siguientes a que estén firmes las sanciones impuestas a los precandidatos, si los sujetos obligados realizaron el pago de forma voluntaria; para lo cual deberá atender la forma de pago que ordene la presente Resolución; para ello, dicho Organismo pondrá a disposición de los sujetos obligados las formas o procedimientos que les faciliten realizar el pago.
- Los OPLE deberán emitir un informe al corte de cada mes, que contenga las sanciones cobradas en dicho periodo, mismo que será hecho del conocimiento de la Unidad de Vinculación del Instituto, en términos de lo dispuesto en el Lineamiento Sexto, Apartado B, numeral 2 del Acuerdo INE/CG61/2017.
- Por otra parte, en caso que las sanciones económicas sean impuestas con base en la capacidad económica federal, deberá procederse en términos de lo dispuesto en el Acuerdo INE/CG61/2017, en lo específico en el Lineamiento Sexto, apartado B, numeral 1, incisos c) y d) en relación al Apartado A del mismo Lineamiento.
- Las sanciones impuestas y cobradas deberán de ser destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia,

tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en términos de las disposiciones aplicables.

6. Modificación al Dictamen Consolidado INE/CG1165/2018.

Por lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Ciudad de México, este Consejo General modifica el Dictamen consolidado respecto de las irregularidades encontradas de la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Puebla, identificado con el número **INE/CG1165/2018**, relativo a la conclusión **3_C9_P1**, considerando **36.3** del citado Dictamen en los términos siguientes:

36.3 Partido de la Revolución Democrática

ID	Observación	Escrito Núm. PRD/CEE/S F-028/18	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
	<p>Oficio Núm. INE/UTF/DA/33302/18</p> <p>(Notificado a Francisco Alejandro Landero de la Heras, el 10 de junio de 2018)</p>					
(...)						
10	<p><i>El sujeto obligado presentó la agenda de actos públicos, de su revisión se observó que reportó eventos con posterioridad a la fecha de su realización; por lo cual, no cumplieron con la antelación de siete días que establece el artículo 143 Bis, del RF. Como se muestra en el ANEXO_8_PM_PUE.</i></p> <p><i>Se solicita presentar en el SIF, lo siguiente:</i></p> <p><i>- Las aclaraciones que a su derecho convengan.</i></p> <p><i>Lo anterior, de conformidad con los artículos 199, numeral 1, inciso c) y e), de la LGIPE; 143 Bis, numeral 1, y 296, numeral 1, del RF.</i></p>	<p><i>El sujeto obligado no emitió contestación al respecto.</i></p>	<p>No atendida</p> <p>Del análisis a la respuesta del sujeto obligado y de la revisión en el SIF, se observó que presentó la agenda de actos públicos con fecha posterior a su realización, sin embargo, omitió reportar dichos eventos con la antelación de siete días como lo establece la normativa, por tal razón la observación no quedó atendida.</p> <p>Véase en el anexo 3_P1.</p> <p>No obstante, los argumentos expuestos esta autoridad procedió en pleno acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional Ciudad de México, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a realizar en lo que se refiere a 170 eventos políticos de un número total de 44 candidatos a presidentes municipales postulados por otros partidos o en candidaturas comunes de los cuales el sujeto obligado no formó parte, a no considerarlos objeto de sanción o</p>	<p>3_C9_P1</p> <p>El sujeto obligado, registró 660 eventos políticos con posterioridad a su realización por lo cual no cumplieron con la antelación como establece la norma.</p>	<p>Registro extemporáneo de eventos.</p>	<p>143 Bis, numeral 1, del RF.</p>

ID	Observación	Escrito Núm. PRD/CEE/S F-028/18	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
	Oficio Núm. INE/UTF/DA/33302/18 (Notificado a Francisco Alejandro Landero de la Heras, el 10 de junio de 2018)					
			de omisión en el presente Dictamen, por lo tanto, se efectuó las adecuaciones necesarias al anexo en el cual se detallan los eventos políticos registrados con posterioridad a su realización y que dieron origen a la observación detallada en el presente Dictamen, el cual fue notificado al partido de la Revolución Democrática mediante oficio núm. INE/UTF/DA/33302, los cuales se detallan en el Anexo 1_SCM-RAP-65-2018 , del presente Dictamen.			
(...)						

7. Modificación a la Resolución INE/CG1166/2018.

En cumplimiento con lo mandatado por la Sala Regional, se procede a modificar la resolución **INE/CG1166/2018** en lo tocante a su considerando **36.3**, en los siguientes términos:

36.3 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

(...)

d) 3 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones **3_C9_P1** (...)

(...)

d) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias infractoras del artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización:

No.	Conclusiones
3_C9_P1	<i>“El sujeto obligado, registró 660 eventos políticos con posterioridad a su realización por lo cual no cumplieron con la antelación como establece la norma.”</i>
	(…)

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de mérito, se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de las conclusiones, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar las observaciones realizadas.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los candidatos involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña materia de estudio y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6, del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de sus candidatos las observaciones que se detallan en el oficio referido en el análisis de la conclusión. Esto, a efecto que los candidatos presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido político, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos la irregularidad de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de la conducta materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea- el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior.”*

De lo anterior se desprende, que, no obstante que el partido político haya incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.

Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación²:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.”

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de

² Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a las conductas sujetas a análisis, las respuestas del sujeto obligado no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de las conductas infractoras de mérito, al sujeto obligado pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de la que son originalmente responsables.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que violentan el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra el mismo bien jurídico tutelado; por cuestión de método y para facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el Considerando **veintiuno** de la presente Resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción.

CALIFICACIÓN DE LA FALTA

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

Con relación las irregularidades identificadas en las conclusiones **3_C9_P1**, (...) de mérito, se identificó que el sujeto obligado informó en el módulo de eventos del Sistema Integral de Fiscalización, **1695** eventos de la agenda de actos públicos, **de manera posterior** a su celebración.

En el caso a estudio, las faltas corresponden a una **omisión** consistente en registrar extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización **1695** eventos, al haber sido celebrados con posterioridad a su registro conforme a lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.³

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado reportó dentro del módulo de agenda de actos públicos del candidato en el Sistema Integral de Fiscalización **1695** eventos con posterioridad a

³ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

su realización, esto es, extemporáneos. A continuación, se refieren las irregularidades observadas:

Conclusión
3_C9_P1 <i>“El sujeto obligado, registró 660 eventos políticos con posterioridad a su realización por lo cual no cumplieron con la antelación como establece la norma.”</i>
(...)

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.

Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de Fiscalización **1695** eventos con posterioridad a la realización de los mismos, esto es, de forma extemporánea se vulnera sustancialmente el principio de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.

Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito obstaculizaron las funciones de verificación de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus atribuciones de verificación.

En las conclusiones que se analizan, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización⁴.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la hipótesis normativa prevista en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, norma de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las conductas señaladas, es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al sujeto obligado se traducen **diversas faltas** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en

⁴ “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.”

razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en una misma conducta y por tanto, en una misma falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son el de certeza y transparencia en la rendición de cuentas por parte de los sujetos obligados.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

(...)

Conclusión 3 C9 P1

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en el registro de eventos en el Sistema Integral de Fiscalización con anterioridad al plazo establecido en la normatividad electoral, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el sujeto obligado reportó **660** eventos con posterioridad a su fecha de realización.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en

el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁵

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a **5 (cinco)** Unidades de Medida y Actualización (considerando como valor \$80.60 pesos) por cada evento registrado de manera extemporánea, cantidad que asciende a un total de **\$265,980.00** (doscientos sesenta y cinco mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido de la Revolución Democrático, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción hasta del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$265,980.00** (doscientos sesenta y cinco mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.).

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

⁵ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

(...)

RESUELVE

(...)

TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando **36.3** de la presente Resolución, se imponen al **Partido de la Revolución Democrática**, las siguientes sanciones:

(...)

d) 3 Faltas de carácter sustancial o de fondo:

Conclusión 3 C9 P1

Una reducción hasta del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$265,980.00** (doscientos sesenta y cinco mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.).

(...)

8. Que la sanción originalmente impuesta al **Partido de la Revolución Democrática** en el inciso **d)** conclusión **3_C9_P1** del considerando **36.3** de la Resolución **INE/CG1166/2018** resolutive **TERCERO**, tuvo modificaciones que se reflejan de la siguiente manera:

Resolución INE/CG1166/2018		Acuerdo por el que se da cumplimiento al SCM-RAP-65/2018	
Inciso d) Conclusión 3_C9_P1	Sanción	Inciso d) Conclusión 3_C9_P1	Sanción
"El sujeto obligado, registró 830 eventos políticos con posterioridad a su realización por lo cual no cumplieron con la antelación como establece la norma."	Conclusión 3_C9_P1 \$334,490.00 (Trescientos treinta y cuatro mil cuatrocientos noventa pesos 00/100 M.N.).	"El sujeto obligado, registró 660 eventos políticos con posterioridad a su realización por lo cual no cumplieron con la antelación como establece la norma."	Conclusión 3_C9_P1 \$265,980.00 (doscientos sesenta y cinco mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.).

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

A C U E R D A

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado **INE/CG1165/2018**, y de la Resolución **INE/CG1166/2018**, aprobada en sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Puebla, en los términos precisados en los Considerandos **6, 7 y 8** del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Notifíquese el contenido del presente Acuerdo al Partido de la Revolución Democrática.

TERCERO. Infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de México, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SCM-RAP-65/2018** dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo.

CUARTO. En términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya causado estado; y los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas en la presente determinación, serán destinados organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, en los términos de las disposiciones aplicables.

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1264/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA REGIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SCM-RAP-75/2018 Y ACUMULADO SCM-RAP-96/2018

A N T E C E D E N T E S

I. Aprobación de la Resolución. El seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado INE/CG/1110/2018 y la Resolución identificada con el número **INE/CG1111/2018**, que presentó la Comisión de Fiscalización del propio Instituto, respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Jefe de Gobierno, diputados locales y alcaldes, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la Ciudad de México.

II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el diecisiete de agosto dos mil dieciocho, el C. José Máximo Pérez Romero, interpuso recurso de apelación ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, a fin de controvertir la parte conducente del Dictamen y la Resolución citados, mismo que se tuvo por recibido el expediente, integrándose bajo el número SCM-RAP-75/2018.

Posteriormente, el veinte de agosto de dos mil dieciocho, el C. José Máximo Pérez Romero, interpuso un segundo recurso de apelación ante la Sala Regional aludida, a fin de controvertir nuevamente la parte conducente del Dictamen y de la resolución referidos, el cual fue identificado con el número SCM-RAP-96/2018.

III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Ciudad de México, determinó acumular los recursos de apelación y resolverlos, en sesión pública celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, determinando en sus Puntos Resolutivos, lo que se transcribe a continuación:

“PRIMERO. Se acumula el Recurso de Apelación SCM-RAP-96/2018 al Recurso de Apelación SCM-RAP-75/2018 de este año. En consecuencia, glósese copia certificada de esta sentencia, al expediente acumulado.

SEGUNDO. Revocar parcialmente, la Resolución impugnada, para los efectos precisados en la sentencia.”

IV. Derivado de lo anterior, la resolución relativa al recurso de apelación **SCM-RAP-75/2018 y Acumulado** revocó parcialmente el Dictamen Consolidado INE/CG1110/2018 y la Resolución INE/CG1111/2018, para los efectos siguientes:

- En lo que respecta al número de eventos de la conclusión 12.13_C1_P2, para otorgar garantía de audiencia y emitir una nueva resolución.
- En relación a la individualización de la sanción impuesta al candidato independiente, a efecto de realizar una nueva a la luz del “*Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad*”, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Al respecto, la Sala señala que esta autoridad, “*podrá, de manera enunciativa y no limitativa, analizar en la nueva determinación lo siguiente:*

- *Allegarse de mayores elementos para conocer las (sic) discapacidad, real y actual del recurrente.*
- *Solicitar la documentación necesaria para saber la capacidad económica actual del Actor*
- *De considerar de manera objetiva alguna discapacidad, deberá sensibilizarse y tomar conciencia, sobre la condición de vida de desigualdad del Actor.*
- *Tener presente un enfoque amplio de la discapacidad.*
- *Considerar la previsibilidad en el ámbito laboral, derivado del estado de discapacidad.”*

Por lo que, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 426, 427, numeral 1, inciso a); 428, numeral 1, incisos c) y d); 430 y 431, numeral 3, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables.

V. En virtud de lo anterior, esta autoridad realizó las siguientes diligencias:

- **Garantía de audiencia y requerimiento de información al C. José Máximo Pérez Romero.**

- a) El tres de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/43198/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió al C. José Máximo Pérez Romero, otrora candidato independiente a la Alcaldía de Magdalena Contreras, a efecto de proporcionarle garantía de audiencia respecto del número de eventos reportados extemporáneamente de manera previa a su realización. Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en la sentencia SCM-RAP-75/2018 y acumulado, se le solicitó la documentación que permitiera conocer la discapacidad real y actual con la que vive, así como las aclaraciones que considerara pertinentes.
- b) El cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el C. José Máximo Pérez Romero dio respuesta al requerimiento formulado, remitiendo la documentación correspondiente.

- **Solicitud de información al Servicio de Administración Tributaria.**

- a) El tres de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/43170/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Servicio de Administración Tributaria informara el régimen fiscal bajo el cual se encuentra inscrito el C. José Máximo Pérez Romero, así como la última declaración de impuestos presentada.
- b) El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 103-05-05-2018-0221, la Administradora de Evaluación de impuestos Internos "5", dio respuesta a la solicitud formulada

- **Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).**

- a) El tres de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/43167/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la CNBV informara las cuentas a nombre del C. José Máximo Pérez Romero, y remitiera los estados de cuenta correspondientes al año dos mil dieciocho.
- b) El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito con número de folio E/IN3-1809-008998-HOS, la CNBV remitió respuesta parcial a la solicitud formulada.

- **Solicitud de información al Instituto Nacional de Rehabilitación.**

- a) El tres de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/43168/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó la colaboración del Director General del Instituto Nacional de Rehabilitación para allegarse de mayores elementos y tener un enfoque más amplio de la discapacidad, conocer los parámetros que deben emplearse para conocer el grado de disminución sensorial de una persona y las implicaciones que ello puede tener en su vida laboral.
- b) El cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INRLGII-DM3/400/18, la Subdirectora de Audiología, Foniatría y Patología del Lenguaje del Instituto Nacional de Rehabilitación, dio respuesta a la solicitud formulada.

- **Solicitud de información al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.**

- a) El tres de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/43169/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó la colaboración de la Directora General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad para allegarse de mayores elementos y tener un enfoque más amplio de la discapacidad, conocer los parámetros que deben emplearse para conocer el grado de disminución sensorial de una persona y las implicaciones que ello puede tener en su vida laboral
- b) El cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio CONADIS/DGAALAJ/AJU/049/2018, el Director General Adjunto de Asuntos Jurídicos de la CONADIS, dio respuesta a la solicitud formulada en la que señaló no ser competente para remitir la información requerida.

- **Solicitud de información al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.**

- a) El cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/43302/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó la colaboración del Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para allegarse de mayores elementos y tener un enfoque más amplio de la discapacidad, conocer los parámetros que deben emplearse para conocer el grado de disminución sensorial de una persona y las implicaciones que ello puede tener en su vida laboral.
- b) El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio D.D.N.205.300.00/030/2018, el Director de Desarrollo Normativo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, dio respuesta a la solicitud formulada.

- **Solicitud de información al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).**

- a) El cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/43303/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó la colaboración de la Presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para allegarse de mayores elementos y tener un enfoque más amplio de la discapacidad, conocer los parámetros que deben emplearse para conocer el grado de disminución sensorial de una persona y las implicaciones que ello puede tener en su vida laboral.
- b) El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio CONAPRED/DGAELPP/DALAI/052/2018, la Subdirectora de Análisis Normativo del referido Consejo, dio respuesta a la solicitud formulada.

- **Solicitud de información a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal.**

- a) El cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/43304/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó la colaboración del Titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para allegarse de mayores elementos y tener un enfoque más amplio de la discapacidad, conocer los parámetros que deben emplearse para conocer el grado de disminución sensorial de una persona y las implicaciones que ello puede tener en su vida laboral.

- b) El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio OAG-DCT-3681-2018, la Directora Contenciosa de la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, dio respuesta a la solicitud formulada.

C O N S I D E R A N D O

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, numeral 1, inciso a) y j); 190, numeral 1, 394, 426, 427, numeral 1, inciso a); 428, numeral 1, incisos c) y d); y 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los informes de ingresos y gastos de los actos de campaña de las y los candidatos independientes.
2. Que el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, la Sala Regional Ciudad de México, resolvió revocar parcialmente el Dictamen Consolidado INE/CG1110/2018 y la Resolución INE/CG1111/2018 en lo que respecta a la conclusión 12.13_C1_P2 del Considerando 12.13.3.3, dictada por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral y a la individualización de la sanción, únicamente para los efectos precisados en la resolución SCM-RAP-75/2018 y Acumulado, por lo que a fin de dar cumplimiento a la misma, se procederá a la modificación del Dictamen y la Resolución de mérito, observando a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria.
3. Que en la sección relativa al estudio de fondo, dentro del Considerando CUARTO, el órgano jurisdiccional señaló que:

“(…)

Capacidad económica.

El Actor refiere como agravio, que en la resolución combatida no se analizó debidamente su capacidad económica actual, pues los ingresos que percibía en el año dos mil diecisiete, no son los mismos que en la presente anualidad, por lo cual argumenta que la posibilidad de continuar laborando se ha visto mermada debido a una cirugía mal realizada, lo que generó que perdiera la capacidad auditiva del oído izquierdo.

Asimismo, alude diversas secuelas adversas a su persona, que lo coloca en situación de discapacidad, por lo que la sanción impuesta le genere un riesgo de subsistencia.

Contestación.

Esta Sala Regional considera que los agravios referidos a la vulneración de fundamentación y motivación en la individualización de la sanción son fundados y suficientes para considerar que la Autoridad responsable pueda analizar nuevamente la capacidad económica del Recurrente en la individualización de la sanción respectiva, como se explica.

Protección integral de los derechos de las personas con discapacidad.

Respecto al tópico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Derechos de Personas con Discapacidad. Ello, con la finalidad de sugerir las directrices que involucren a personas con discapacidad.

En ese tenor, las autoridades tienen la obligación de centrar su atención en el derecho de acceso a la justicia de las personas con discapacidad, señalando con especial énfasis las medidas transformativas que deben adoptarse, ya sean culturales, actitudinales, en la infraestructura física, o en el contenido de los procesos y decisiones de las autoridades, para que sea ejercido con igualdad de condiciones que el resto de la población con discapacidad, lo que dará pauta a que gocen y ejerzan plenamente todos sus demás derechos.

Derivado de lo anterior, cualquier autoridad –incluidas por supuesto as de naturaleza electoral- que conozca de alguna cuestión o controversia en la que participe o se parte alguna persona que se autoidentifique con discapacidad, no debe considerar tal caso, como una cuestión ordinaria, susceptible de ser resuelta como mero trámite.

Sino que, en estos casos, debe advertirse la naturaleza y características de la cuestión planteada, de modo que en primer orden, se determine si conforme a las atribuciones que la norma aplicable le confiere a la autoridad responsable se pronuncie de fondo del caso concreto, considerando las directrices establecidas en el referido protocolo.

Caso concreto

En el recurso de apelación SCM-RAP-96/2018, el Actor hizo del conocimiento a esta Sala Regional, circunstancias médicas que se han actualizado en su entorno, y que trasciende en su vida personal, lo cual se considera suficiente para que con base en ellos, la Autoridad responsable realice una nueva individualización de la sanción.

Lo anterior, porque de no analizarse esa posible situación de vulnerabilidad existiría el riesgo de emitir un pronunciamiento que pudiera agravar la situación personal del Actor, dado el daño físico que expresa, de ahí que se considera necesario que el Consejo General del INE, considere su situación de persona con discapacidad, para efectos de fijar la sanción respectiva.

En consecuencia, ante la eficacia del agravio hecho valer por la Actora, pues del análisis integral de la resolución reclamada se advierte que la Autoridad responsable no consideró la situación de vulnerabilidad que el recurrente afirma que se encuentra, por lo que se debe revocar la sanción impuesta, con la finalidad de que la Autoridad responsable, en el ámbito de sus atribuciones aplique el 'Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Derechos de Personas con Discapacidad' y emita una nueva resolución al caso.

Efectos.

Al resultar fundados los agravios relativos al número de eventos reportados en la agenda del recurrente, lo procedente es revocar a la conclusión 12.13_C1_P2 de la Resolución Impugnada, para que la Autoridad Responsable previa garantía de audiencia, emita un nuevo Dictamen y Resolución.

Por lo que hace a la individualización de la sanción impuesta al apelante, se instruye al Consejo General del INE para que, a la luz del Protocolo invocado, individualice la sanción impuesta al Actor.

Al respecto, la Autoridad responsable, podrá, de manera enunciativa y no limitativa, analizar en la nueva determinación lo siguiente

- *Allegarse de mayores elementos para conocer las discapacidad, real y actual del recurrente.*
- *Solicitar la documentación necesaria para saber la capacidad económica actual del Actor.*
- *De considerar de manera objetiva alguna discapacidad, deberá; sensibilizarse y tomar conciencia, sobre la condición de vida de desigualdad del Actor.*
- *Tener presente un enfoque amplio de la discapacidad.*
- *Considerar la previsibilidad en el ámbito laboral, derivado del estado de incapacidad.*

Para cumplir con lo ordenado, el INE contará con un plazo de veinte días naturales, contados a partir de la notificación de esta sentencia, debiendo informar a esta Sala regional respecto de la decisión que adopte, dentro de los tres días hábiles siguientes a que ello ocurra.

(...)"

En ese orden de ideas, esta autoridad procede a emitir la modificación al Dictamen y la Resolución ordenada, otorgando garantía de audiencia al actor respecto de los eventos observados en la conclusión 12.13_C1_P2; y reindividualizando la sanción tomando en cuenta la capacidad económica del candidato independiente, a la luz del Protocolo señalado.

4. Que de conformidad con lo expresamente ordenado por la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esta autoridad administrativa electoral procedió a consultar el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad”¹⁷ expedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a realizar diversas diligencias con la finalidad de allegarse de los elementos suficientes para *“conocer las (sic) discapacidad, real y actual del recurrente”, “sensibilizarse y tomar conciencia, sobre la condición de vida de desigualdad”, “tener presente un enfoque amplio de la discapacidad” y “considerar la previsibilidad en el ámbito laboral, derivado del estado de discapacidad.”*

En relación a lo anterior, el Protocolo señala que existen diversos enfoques y explicaciones en torno a lo que es la discapacidad y cómo la sociedad y el Derecho responden a la misma, así pues tomando como punto de partida el modelo social, el nuevo modelo de Derechos Humanos reconoce a las personas con discapacidad como titulares de derechos, por ello, promueve que efectivamente los ejerzan en igualdad de condiciones que el resto de la población y sin discriminación alguna, reiterando su dignidad, así como el respeto por la diferencia que implica la discapacidad, lo cual conlleva la ausencia de conductas orientadas a la reproducción de estereotipos y a la exclusión y desventaja social de las personas con discapacidad; fomentando su inclusión y participación plena y efectiva en la sociedad, toda vez que sus necesidades y requerimientos son atendidos por la comunidad.

En ese sentido, el máximo Tribunal de Justicia de la nación cita el concepto de ‘discapacidad’ establecido en el inciso e) del preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad¹⁸, en donde se define como un *“...concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás.”*

Por otro lado, el Protocolo señala que existen diversos tipos de discapacidad, los cuales se apegan a lo establecido en el Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, siendo los siguientes:

¹⁷ Disponible para su consulta en:

<https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/archivos/paginas/Protocolo%20DiscapacidadISBN.pdf>

¹⁸ <https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf>

- **Discapacidad Física** (motriz o motora): Es la secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura [*diversidad funcional*], y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
- **Discapacidad Mental** (psicosocial): A la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona, que aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social [*diversidad funcional*], y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
- **Discapacidad Intelectual**: Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la estructura del pensamiento razonado, como en la conducta adaptativa de la persona [*diversidad funcional*], y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
- **Discapacidad Sensorial**: Es la deficiencia estructural o funcional de los órganos de la visión, audición, así como de las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos [*diversidad funcional*], y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

Por otra parte, también se reconoce como un elemento primordial al momento de impartir justicia, la comprobación de la discapacidad para saber en qué situaciones se está frente a una persona con discapacidad.

Al respecto, se retoma lo establecido en la referida Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en donde se establece la atribución del Sector Salud de expedir un certificado de reconocimiento y calificación de la discapacidad con validez nacional, mismo que deberá expedirse a través de un médico especialista en medicina de rehabilitación y bajo los términos de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Aunado a lo anterior, esta autoridad consultó el cuadernillo “Discapacidad auditiva. Guía didáctica para la inclusión en educación inicial y básica”¹⁹, mismo que refiere que la audición significa oír y comprender lo que se dice, y resulta indispensable para la comunicación oral; lo anterior, tomando en cuenta que el oído transforma las ondas sonoras del exterior, las amplifica y las convierte en energía bioeléctrica para que el cerebro las procese y entienda.

Así también, se establece que “la pérdida auditiva es la incapacidad para recibir adecuadamente los estímulos auditivos del medio ambiente. Desde el punto de vista médico-fisiológico, la pérdida auditiva consiste en la disminución de la capacidad de oír; la persona afectada no sólo escucha menos, sino que percibe el sonido de forma irregular y distorsionada, lo que limita sus posibilidades para procesar debidamente la información auditiva de acuerdo con el tipo y grado de pérdida auditiva.

La persona que no puede escuchar enfrenta graves problemas para desenvolverse en la sociedad, por las dificultades para detectar la fuente sonora, identificar cualquier sonido del habla o ambiental, seguir una conversación y sobre todo comprender el lenguaje oral. Estas pérdidas repercuten en el desarrollo de las habilidades del pensamiento, del habla y del lenguaje; también en la conducta, el desarrollo social y emocional, y el desempeño escolar y laboral.

El grado de pérdida se especifica de acuerdo con el umbral de intensidad que una persona escucha. Se mide en términos de qué tan fuerte debe ser el sonido para escucharlo, y la unidad de medida es el decibelio. Una persona que sufre una pérdida de 60 decibelios puede oír sonidos como el ladrido cercano de un perro grande, un chiflido fuerte o el motor de un camión; pero no puede escuchar sonidos de menor volumen o intensidad, como las palabras en una conversación, el trinar de un ave o el agua de un río.”

Asimismo, de acuerdo con el INEGI²⁰, la prevalencia de algún tipo de la discapacidad en la población nacional en México para 2014 era de 6%, según los datos de la ENADID 2014, es decir, que 7.1 millones de habitantes del país no pueden o tienen mucha dificultad para hacer alguna de las ocho actividades

19

https://www.educacionespecial.sep.gob.mx/2016/pdf/discapacidad/Documentos/Atencion_educativa/Auditiva/3discapacidad_auditiva.pdf

²⁰ <http://www.beta.inegi.org.mx/temas/discapacidad/default.html>

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825094409.pdf

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/76/702825497842/702825497842_23.pdf

evaluadas: caminar, subir o bajar usando sus piernas; ver (aunque use lentes); mover o usar sus brazos o manos; aprender, recordar o concentrarse; escuchar (aunque use aparato auditivo); bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse; y problemas emocionales o mentales, y son estas personas, quienes enfrentan múltiples obstáculos para gozar de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, en particular, por lo que hace a la discapacidad auditiva se considera a las personas que presentan pérdida o restricción de la capacidad para recibir mensajes verbales u otros mensajes audibles. Dicho déficit total o parcial se evalúa por el grado de pérdida de la audición en cada oído.

Adicionalmente a las consideraciones anteriores, la Unidad Técnica de Fiscalización recurrió a diversas Instituciones especializadas en temas de discapacidad y no discriminación, las cuales acorde a sus atribuciones, competencias y capacidades, aportaron la información que consideraron pertinente, resaltando las que se señalan a continuación.

Bajo esa tesitura, el Instituto Nacional de Rehabilitación detalló lo siguiente:

“(…)

Indique cuáles son los parámetros que deben emplearse para determinar el grado de discapacidad sensorial auditiva en una persona adulta.

Los parámetros son resultado de los siguientes estudios:

-Estudio de audiometría tonal bilateral con vía aérea y vía ósea.

-Logoaudiometría.

-Búsqueda de reflejo epitelial.

-Potenciales auditivos provocados de tallo cerebral.

Estos son estudios indispensables para determinar la utilidad social del individuo.

Señale cuales son las condiciones de vida de desigualdad de una persona adulta con discapacidad sensorial auditiva parcial.

Ante una pérdida auditiva unilateral, el sujeto únicamente presenta dificultad para localizar la fuente sonora y una disminución para la discriminación sonora en ambientes con competencias auditivas, como son ambientes ruidosos de 60 decibeles o más.

(…)

Precise, en su caso, la previsibilidad en el ámbito laboral derivado del estado de discapacidad aludido.

Dificultad para la comunicación oral en ambientes con competencia auditiva, ambientes ruidosos de 60 decibeles o más.

Exponga las aclaraciones que a su derecho convenga.

*Una vez contestadas las preguntas anteriores, **el presente caso tiene insuficiente información sobre el grado de pérdida auditiva del oído izquierdo pues no documenta con certeza que la pérdida auditiva para este oído sea total.***

Una pérdida auditiva superficial no ocasiona al individuo el mismo grado de discapacidad que una pérdida auditiva severa o profunda.
(...)"

[Énfasis añadido]

En la misma tesitura, se solicitó la colaboración del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en cuya respuesta manifestó:

"(...)
La audiometría es el estudio indicado para determinar el grado de audición de una persona adulta. En dicho estudio se determina la pérdida auditiva y si es unilateral o bilateral. Para considerarse una discapacidad auditiva debe ser a partir de una pérdida moderada en ambos oídos.
(...)

El grado de discapacidad sensorial auditiva clínicamente se clasifica por la Organización Mundial de la Salud en superficial, moderada, severa o profunda, y puede ser unilateral o bilateral.

No se utiliza el término parcial, en el caso de ser superficial y unilateral no representa una limitación funcional.

En el caso de ser moderada puede representar dificultad para la comunicación interpersonal, y siempre y cuando se presente en ambos oídos.

En el caso de severa y unilateral representa una limitación para sus actividades sociales y laborales.

*No obstante, **estas dificultades pueden ser corregidas con el uso de un auxiliar auditivo.***
(...)

Se observa desigualdad en los casos donde la familia no cuenta con los recursos económicos o de información para brindar una atención adecuada, si cuenta con ellos podemos afirmar, que su desarrollo e inclusión social será como el de cualquier otra persona.

***Las oportunidades de empleo que pueda tener una persona con discapacidad sensorial dependen más de su grado de escolaridad y de las herramientas con las que cuente** (ya sea, lenguaje a señas, lectura labio-facial, uso de auxiliar auditivo) para comunicarse. Así como la causa de pérdida auditiva congénita o adquirida.*

En el Sistema Nacional DIF, se cuenta con agencias de inclusión laboral, que promueven inclusión laboral de personas con discapacidad, una vez que son valoradas sus aptitudes y habilidades para el trabajo.

En el DIF Nacional existen programas de apoyo para la inclusión al empleo y la vida social de las personas con discapacidad auditiva, los cuales van dirigidos a brindar la orientación necesaria para que la persona con discapacidad cuente con los elementos para integrarse en un ámbito competitivo laboral, en igualdad de condiciones que una persona sin discapacidad, dicha atención se basa en la detección de las capacidades residuales del sujeto, y detectar los puestos factibles a desempeñar.

(...)

En el Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la rehabilitación e Integración Laboral Iztapalapa en el departamento de rehabilitación para el trabajo durante el año 2017 se recibieron 80 casos de personas con discapacidad auditiva, el 80% de ellos fueron integrados al empleo competitivo y a la capacitación para el trabajo, el 20% restante se encuentra en proceso de atención médica o psicológica, se considera que en corto plazo serán candidatos a empleo.

(...)

En la experiencia de los departamentos de Inclusión Laboral que forman parte de los Centros de Rehabilitación del Sistema Nacional DIF, la integración laboral de personas con discapacidad auditiva es considerada la de mayor éxito, ya que son bien recibidos por sus compañeros de trabajo y por los empleadores, por lo cual se muestran abiertos a la inclusión.

*(...) **es importante mencionar que para emitir estas respuestas se solicitó el apoyo de un médico especialista en comunicación humana.***

(...)"

[Énfasis añadido]

Precisado lo anterior, conviene resaltar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 2, párrafo 4, señala que se entienden las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

Al respecto, el multicitado Protocolo establece que “la doctrina sobre el tema señala que la obligación de llevar a cabo o no los ajustes dependerá del análisis que se haga en cada caso en concreto, debiendo tomar en cuenta, entre otros factores, los costos de la medida a realizar, el tamaño de la entidad que la debe poner en práctica y su situación financiera, la posibilidad de obtener algún tipo de apoyo o subvención para la realización de la modificación, la afectación de algún modo al resto de

personas que no se beneficiarán con la medida, así como los efectos discriminatorios que pudieran resultar para la persona con discapacidad, en caso de su no adopción.

Se resalta este último elemento, es decir, los efectos discriminatorios que pudiera tener para la persona con discapacidad el que no se lleve a cabo un ajuste razonable a su favor, toda vez que se considera que éste debe ser el principal factor a tomarse en cuenta para la determinación de si se está o no ante una obligación de este tipo, ya que no se debe olvidar que en todo caso, sea cual sea el motivo o argumento empleado para no llevarlo a cabo, el efecto de su omisión implicaría una discriminación indirecta, llegando al mismo punto en que se inició con su solicitud, es decir, una ausencia de igualdad de oportunidades.

En razón de ello se propone que en tales casos debe arribarse a una solución que, sin afectar de una manera gravosa a la parte obligada (y tomando debidamente en cuenta su situación particular), efectivamente se cumpla con la adecuación 'necesaria' (tal como la llama la Convención) para que las personas con discapacidad puedan gozar del entorno, los servicios, y del ejercicio de derechos como lo haría cualquier otra persona sin discapacidad. De lo contrario, en todo caso se podría argumentar la desproporcionalidad de la medida por cualquier motivo.

Un elemento más a destacar en el caso de los ajustes razonables atiende al hecho de que tales modificaciones deben llevarse a cabo atendiendo a casos concretos y particulares, tal cual lo señala la Convención, es decir, cuando colocan a la persona con discapacidad en una 'situación de desventaja sustancial en comparación con otras personas sin discapacidad'. Por lo que las desventajas que son menores o triviales no impondrán la obligación de llevar a cabo ajustes razonables.

Por lo tanto, en la determinación de un ajuste razonable durante la tramitación de un procedimiento, se debe atender a las valoraciones antes mencionadas, sin perder de vista la obligación prevista por la Convención en su artículo 13, consistente en llevar a cabo estos ajustes al procedimiento para asegurar que las personas con discapacidad tengan un acceso efectivo a la justicia.

Determinación que quedará al arbitrio de la o el juzgador, el cual deberá tener un amplio conocimiento acerca de la discapacidad y toma de conciencia acerca de las barreras que inhiben la participación de las personas con discapacidad en el acceso a la justicia para garantizar que se dicte el ajuste que más favorezca a la persona, atendiendo a su situación concreta, evitando que en su criterio o determinación influyan algún tipo de barreras actitudinales que propician una percepción negativa

de las personas con discapacidad, sobre todo negando su reconocimiento como personas titulares de derechos humanos.”

Derivado de lo anterior, se considera que de las diligencias realizadas y de la información obtenida esta autoridad cuenta con elementos suficientes *“sensibilizarse y tomar conciencia, sobre la condición de vida de desigualdad”, “tener presente un enfoque amplio de la discapacidad” y “considerar la previsibilidad en el ámbito laboral, derivado del estado de discapacidad”* y tener por presentada la documentación del candidato independiente relativa a la disminución de su capacidad auditiva. Lo anterior, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia que se acata.

5. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso del recurso de apelación identificado como **SCM-RAP-75/2018 y Acumulado**.

Es importante señalar que el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la determinación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) respecto del valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, el cual será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país,²¹ mismo que para el ejercicio 2018, correspondió a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.).

Lo anterior de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo precedente establece *“A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.”*

²¹De conformidad con el Punto Resolutivo PRIMERO de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de 2016, publicada el pasado 18 de diciembre de 2015, *“para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales (Delegaciones) del Distrito Federal.”*

En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de Medida y Actualización; por lo que, las multas impuestas en el presente Acuerdo, a las que les corresponde la aplicación del salario mínimo general vigente en el entonces Distrito Federal para el ejercicio 2018, se ajustan al valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente en 2018.

6. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las condiciones socio económicas del ente infractor.

Al respecto, por lo que hace a la determinación de la capacidad económica de los candidatos independientes para hacer frente a las sanciones impuestas, la autoridad electoral al emitir la resolución **INE/CG1111/2018** tomó en consideración la información presentada directamente por los candidatos, de manera específica, en el informe de capacidad económica, en el cual se determinó tomar en cuenta el ingreso y un porcentaje creciente a saber:

Ingresos	Sanción
\$0 a \$100,000.00	Amonestación pública
\$101,000.00 a \$300,000.00	Hasta el 5%
\$301,000.00 a \$600,000.00	Hasta el 10%
\$601,000.00 a \$1,000,000.00	Hasta el 15%
\$1,000,001 a \$1,500,000.00	Hasta el 20%
\$1,500,001 en adelante	Hasta el 25%

No obstante, en estricto cumplimiento a lo mandatado por la Sala Regional, en el SCM-RAP-75/2018 y su acumulado, se advirtió que al comparar las cifras de ingresos y gastos del informe de capacidad económica presentado a esta autoridad durante el periodo de campaña por el candidato, no existe remanente en favor del ciudadano en comento.

Derivado de lo anterior, bajo el irrestricto apego al principio de exhaustividad, esta autoridad agotó todas las vías y medios posibles para allegarse de información que permitiera señalar con certeza la capacidad económica actual y real del actor.

Por consiguiente, mediante oficio INE/UTF/DRN/43167/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informara las

cuentas a nombre del C. José Máximo Pérez Romero, así como para que remitiera los estados de cuenta correspondientes al año dos mil dieciocho; sin embargo, de la respuesta emitida por parte de la autoridad bancaria, no se identificaron cuentas a nombre del entonces candidato independiente.

Asimismo, la Unidad Técnica de Fiscalización, mediante oficio INE/UTF/DRN/43170/2018, solicitó al Servicio de Administración Tributaria informara el régimen fiscal bajo el cual se encuentra inscrito el C. José Máximo Pérez Romero, así como la última declaración de impuestos presentada; sin embargo, de la respuesta emitida por parte de la autoridad Hacendaria, se tuvo conocimiento de que el candidato independiente está registrado bajo el “Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios” y que no presentó declaraciones de impuestos en el periodo de 2017 a 2018.

Por último, en respuesta a la garantía de audiencia el ciudadano en comento presentó los comprobantes de servicios de interconsulta, resultados de estudios de audiometría, control de ingreso a cirugía, recetas médicas, nota de egreso de hospitalización y formato de indicaciones post operatorias de cirugía de oídos, todo ello expedido por el INR.

En las relatadas condiciones, todas las circunstancias y documentación antes señaladas, serán analizadas a la luz del multicitado Protocolo, atendiendo al caso en concreto y en particular, en cumplimiento a lo mandatado por la Sala Regional.

En estas condiciones, mientras no se cuente con los elementos cuyo grado de convicción sean suficientes sobre la capacidad económica actual del recurrente y tomando en consideración lo expresamente manifestado en el recurso de apelación que por esta vía se acata, esta autoridad en la imposición de la sanción deberá optar por imponer aquella que corresponda a las circunstancias particulares del caso.

7. Que en tanto la Sala Regional Ciudad de México, dejó intocadas las demás consideraciones que sustentan el Dictamen Consolidado identificado como **INE/CG1110/2018**, este Consejo General únicamente se avocará al estudio y análisis de lo relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en el apartado **12.13**, conclusión **12.13_C1_P2**, en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Regional, materia del presente Acuerdo.

Visto lo anterior, se modifican los apartados correspondientes para quedar en los términos siguientes:

“(…)

12.13. José Máximo Pérez Romero

“(…)

Observación						Oficio de contestación S/N de fecha 4 de septiembre de 2018	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió	
El sujeto obligado presentó la agenda de eventos; de su revisión se observó que reportó un evento previo a su realización, sin embargo, éste no cumplió con la antelación de siete días que establece el artículo 143 bis del RF. Lo anterior se detalla en el siguiente cuadro:											
ID	Evento	Fecha del evento	Fecha creación	Nombre del evento	Días de antelación						
00010	No Oneroso	15-06-18	09-06-18	Recorrido por el candidato sin partido y concejales por las calles de las colonias Barrio San Francisco San Francisco San Jerónimo Aculco	6	En cuanto al punto número 1, (uno) del oficio de requerimiento que nos ocupa, manifestó que efectivamente por un error de cálculo que no fue de intencional ya que desafortunadamente se hizo un cálculo mal en cuanto a los 7 días que la ley otorga para informar sobre la realización de los eventos, siendo entonces que el suscrito dio de alta el indicado evento no con los 7 días de anticipación sino únicamente con 06 días, sin embargo reitero que no fue intención del suscrito dado que se debió a un error de cálculo de los días pues se entendió que el día de la celebración del evento fue considerado como el suscrito como un día más que se contabilizaba dentro de esos 07 días, razón por la cual se reportó este evento que nos ocupa únicamente con 06 días de anticipación, empero, manifestó que solicito sea tomado en consideración que el suscrito es un total inexperto en el uso del sistema de fiscalización ya que es la primera vez que lo conocí además de que por falta de conocimientos en dicho sistema el de la	No atendida	12.13_C1_P2	El sujeto obligado informó de manera extemporánea 1 evento de la agenda de actos públicos, de manera previa a su celebración.	Eventos registrados extemporáneamente, de manera previa a su celebración.	Artículo 143 Bis del RF
Se le solicita presentar en el SIF, si así lo considera pertinente, las aclaraciones que a su derecho convengan.											
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 143 bis, numeral 1 del RF.							De lo anterior aun cuando el sujeto obligado señaló no tener conocimientos sobre el manejo del SIF, esto no lo exime de la responsabilidad de tener que reportar los eventos con una antelación de al menos 7 días a la fecha en que se llevaran a cabo los eventos, a través del SIF en el módulo de agenda de eventos; por tal razón, la observación no quedó atendida.				

Observación Oficio: INE/UTF/DA/43198/18	Oficio de contestación S/N de fecha 4 de septiembre de 2018	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
	voz incurrió en dicha situación (...)"				
<p>Adicionalmente, en cumplimiento a lo establecido en la sentencia SCM-RAP-75/2018 y acumulado, se le solicitar presente en el SIF:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La documentación que permita conocer a esta autoridad la discapacidad real y actual que arguyó el sujeto obligado en el expediente SCM-RAP-75/2018. - Las aclaraciones que a su derecho convengan. 	<p>2.- En cuanto al correlativo que se contesta del oficio de errores y omisiones que nos ocupa, manifiesto que efectivamente en la actualidad el suscrito no cuenta con ingresos económicos dado que por una cirugía mal practicada sufro actualmente con una discapacidad que no me permite tener una vida laboral y personal normal, pues he perdido la audición del oído izquierdo y disminuido la del oído derecho, además de que debido a la cirugía que menciono desde que se practicó al de la voz el mismo sufro de vértigo y mareos los cuales han venido empeorando con el paso del tiempo, aunado al hecho de que el oído izquierdo causa un zumbido tan fuerte que no permite la mayor parte del día tener audición con el oído derecho que además se encuentra también disminuida, por ende, en este momento el de la voz se encuentra imposibilitado para cubrir cualquier multa que se impusiera al de la voz porque no cuento con capacidad económica actualmente para cubrirla, y si bien el de la voz inicialmente al momento de registrarse como aspirante a candidato dijo percibía anualmente la cantidad que se mencionó en el mismo informe, debo decir que resulta evidente, que por la fecha en que se llevó</p>	<p>Del análisis a lo manifestado por el sujeto obligado y de la verificación a la información que obra en es SIF, se observó que presentó 3 formatos de "Solicitud de interconsulta" un formato de "cirugía", estudios realizados de audiología, una "Nota de egreso de hospitalización", una "Receta consulta externa", así como 2 hojas de "Indicaciones postoperatorias cirugía oídos", evidencia con fechas de agosto a octubre de 2017.</p> <p>Respecto a la valoración de la capacidad económica en comento será objeto de análisis en la resolución del presente Dictamen.</p>			

Observación Oficio: INE/UTF/DA/43198/18	Oficio de contestación S/N de fecha 4 de septiembre de 2018	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
	<p>a cabo dicho registro de aspirante, los ingresos reportados se referían al año 2017, pero no al año en curso, siendo que actualmente y desde el mes de agosto de 2017 en que me fue practicada dicha cirugía el de la voz se encuentra imposibilitado físicamente para desempeñarse laboralmente, aunado al hecho de que apelo al criterio de nuestro máximo tribunal en el sentido que no debe darse el mismo trato a un particular que a un partido político dado las desventajas en que se encuentra el particular y debido a la eventualidad con que en este caso el suscrito ha participado en el Proceso Electoral 2017-2018, que ha sido por única ocasión mientras que los partidos políticos lo hacen de forma permanente y constante, por lo que solicito se tome en consideración al momento de resolver el presente asunto, por lo que a efecto de acreditar lo aquí dicho anexo como documental adjunta al presente la documentación que acredita lo que vengo manifestando en el presente punto.</p>				

En este orden de ideas, se han realizado las modificaciones a la parte conducente Dictamen Consolidado, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos por la Sala Regional de la Ciudad de México dentro del expediente número **SCM-RAP-75/2018 y Acumulado.**

8. Realizado lo anterior, toda vez que la Sala Regional Ciudad de México, dejó intocadas las demás consideraciones que sustentan la Resolución identificada

como **INE/CG1111/2018**, este Consejo General únicamente se avocará al estudio y análisis de lo relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en el considerando **12.13.3.3**, conclusión **12.13_C1_P2**, y lo relativo a la individualización de la sanción en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Regional, materia del presente Acuerdo.

Visto lo anterior, se modifican los apartados correspondientes para quedar en los términos siguientes:

(...)

b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización: **Conclusión 12.13_C1_P2**.

No.	Conclusión	Monto involucrado
12.13_C1_P2	<i>“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 1 evento de la agenda de actos públicos, de manera previa a su celebración”.</i>	N/A

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del candidato independiente, la autoridad debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de cinco días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En el caso en estudio, se tiene que la falta corresponde a una **omisión** consistente reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos en el Sistema Integral de Fiscalización 1 evento con anterioridad a su realización, esto es, en forma extemporánea, la cual tuvo verificativo durante el periodo campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México, vulnerando lo establecido en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.

Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) del presente considerando.
(...)

c) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

Por lo que hace a las conclusiones 12.13_C2_P1, 12.13_C1_P2, 12.13_C3_P2.

Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte del candidato independiente, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa.

En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.

Visto lo anterior, se desprende que el candidato independiente referido incumplió con su obligación, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado de transparencia y certeza en la rendición cuentas, por consecuencia, se vulnera la legalidad como principio rector de la actividad electoral, la cual se traduce en la especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el tiempo establecido para ello.

Respecto de la capacidad económica del candidato independiente, el artículo 223 bis, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades financieras, bancarias y fiscales.

En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe ingresos y gastos la campaña del sujeto infractor, se advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Informe de Capacidad Económica, que permitiera determinar que cuenta con los recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción mínima.

Máxime cuando esta autoridad tuvo a la vista constancias exhibidas por el candidato, con las que acredita que ha erogado recursos económicos en beneficio de su salud. Es así que, esta autoridad tiene la obligación de atender a la situación económica del infractor, a la luz de que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria depende del estado patrimonial del responsable.

En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario.

En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha sanción es la **Amonestación Pública**.

Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al candidato independiente no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su haber económico.

Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.

En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia **"MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL"**, esta autoridad considera que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la imposición de la sanción para su graduación.

Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:

"Registro No. 192796

Localización: Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999

Página: 219

Tesis: 2a./J. 127/99

Jurisprudencia Materia(s): Administrativa

MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. *Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es*

que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.

Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Mara Gómez Pérez.

Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo sancionador electoral como la sanción mínima a imponer²² pues es evidente que no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.

En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos

²² Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, *Manual de Derecho Penal*, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 7011.

Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "**MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA**", la cual para efectos ilustrativos se transcribe a continuación:

"Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999

Página: 700

Tesis: VIII.2o. J/21

Jurisprudencia Materia(s): Administrativa

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales para la no imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.

Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: José Martín Hernández Simental.

Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo Castro León.

Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia Villarreal Martínez.

Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.

Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes:

Inciso	Conclusión	Tipo de conducta
a)	12.13_C2_P1	Tiempo real (1er Periodo)
a)	12.13_C3_P2	Tiempo real (2do Periodo)
b)	12.13_C1_P2	Eventos registrados extemporáneamente, de manera previa a su celebración.

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al candidato independiente, el **C. José Máximo Pérez Romero**, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso d), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una **Amonestación Pública**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

9. Que la sanción originalmente impuesta al **C. José Máximo Pérez Romero**, en la resolución **INE/CG1111/2018** en su Resolutivo **VIGÉSIMO**, así como las modificaciones procedentes con base a lo razonado en el presente Acuerdo, se resumen a continuación:

Sanciones en Resolución INE/CG1111/2018	Modificación	Sanción en Acatamiento a SCM-RAP-75/2018 y acumulado
<p>VIGÉSIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 33.12.3.3 de la presente Resolución, se imponen a la Candidata Independiente José Máximo Pérez Romero, las sanciones siguientes:</p> <p>a) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 12.13_C2_P1, 12.13_C3_P2.</p> <p>b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 12.13_C1_P2.</p> <p>Una multa equivalente a 178 (Ciento setenta y ocho) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de \$7,495.80 (Siete mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 80/100 M.N.).</p>	<p>Se realiza una nueva individualización e imposición de la sanción al no tener certeza respecto de la capacidad económica actual y real del actor, en consecuencia se determina imponer la sanción prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso d), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.</p>	<p>VIGÉSIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 33.12.3.3 de la presente Resolución, se imponen a la Candidata Independiente José Máximo Pérez Romero, las sanciones siguientes:</p> <p>a) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 12.13_C2_P1, 12.13_C3_P2.</p> <p>b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 12.13_C1_P2.</p> <p>Una Amonestación Pública.</p>

9. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el presente Acuerdo, se imponen al **C. José Máximo Pérez Romero**, las sanciones siguientes:

VIGÉSIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando **33.12.3.3** de la presente Resolución, se imponen al Candidato Independiente **C. José Máximo Pérez Romero**, las sanciones siguientes:

a) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones **12.13_C2_P1 y 12.13_C3_P2.**

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión **12.13_C1_P2.**

Una Amonestación Pública.

En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

A C U E R D A

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado identificado como **INE/CG1110/2018** y la Resolución **INE/CG1111/2018**, aprobados en sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades de campaña de los candidatos a los cargos de Jefe de Gobierno, Diputados Locales y Alcaldes, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México, en los términos precisados en los Considerandos **7, 8 y 9**, del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral que informe a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SCM-RAP-75/2018 y Acumulado SCM-RAP-96/2018**, remitiéndole para ello las constancias atinentes.

TERCERO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México, a efecto de que proceda a publicar en el periódico o gaceta oficial del gobierno de la Ciudad de México, la amonestación pública impuesta al **C. José Máximo Pérez Romero**, la cual se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme.

CUARTO. Notifíquese electrónicamente el presente Acuerdo al Candidato Independiente, a través del Sistema Integral de Fiscalización

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1265/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA REGIONAL XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SX-RAP-64/2018, INTERPUESTO POR MOVIMIENTO CIUDADANO, EN CONTRA DEL DICTAMEN CONSOLIDADO INE/CG1105/2018 Y LA RESOLUCIÓN INE/CG1107/2018

A N T E C E D E N T E S

I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. El seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado **INE/CG1105/2018** y la Resolución **INE/CG1107/2018**, respecto a las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos postulados por los partidos políticos y coaliciones a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Chiapas.

II. Recurso de apelación. Inconforme con lo anterior, diez de agosto del presente año, el Movimiento Ciudadano a través de su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, interpuso recurso de apelación para controvertir la parte conducente del Dictamen Consolidado **INE/CG1105/2018** y la Resolución **INE/CG1107/2018**, mismo que fue recibido por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal con sede en Xalapa, Veracruz (en adelante, Sala Regional), el quince del mismo mes y año, quedando registrado bajo el número de expediente **SX-RAP-64/2018**.

III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, en sesión pública celebrada el treinta y uno de agosto del presente año, la Sala Regional resolvió el recurso referido, determinando lo que a la letra se transcribe:

***“PRIMERO.** Se **revoca** la resolución impugnada, en lo que fue materia de impugnación, para los efectos precisados en el Considerando Cuarto de esta sentencia*

***SEGUNDO.** El Instituto Nacional Electoral deberá informar del cumplimiento de la presente sentencia, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.*

***TERCERO.** Infórmese a la Sala Superior de este Tribunal Electoral el dictado de la presente sentencia.”*

IV. Derivado de lo anterior, en la ejecutoria antes citada la Sala Regional resolvió modificar el Dictamen Consolidado **INE/CG1105/2018** y la Resolución **INE/CG1107/2018**, por cuanto hace a la conclusión sancionatoria **7_C6_P3** y **10_C11_P3**, correspondiente a Movimiento Ciudadano, a efecto que se realizará lo siguiente:

- Respecto de las conclusiones **7_C6_P3** y **10_C11_P3**, emita una nueva resolución de manera exhaustiva, fundada y motivada, en la que considere que los montos involucrados deben reflejar fielmente el monto real de la operación, esto es, el monto que se ampare en cada factura.

En ese sentido, considerando que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serán definitivas e inatacables, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de Acuerdo correspondiente.

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44 numeral 1, incisos aa) y jj) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este

Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de campaña de ingresos y gastos de los candidatos postulados por los partidos políticos y coaliciones a los cargos de Diputados Locales e integrantes de ayuntamientos correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Chiapas.

2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones emitidas por las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso la recaída al Recurso de Apelación identificado con el número de expediente **SX-RAP-64/2018**.

3 Que la Sala Regional resolvió modificar el Dictamen Consolidado **INE/CG1105/2018** y la Resolución **INE/CG1107/2018**, emitida por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto a las irregularidades encontradas de la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos postulados por los partidos políticos y coaliciones a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Chiapas, por lo que esta autoridad procede a la modificación de dicho documento, a fin de dar cumplimiento a los efectos precisados en la sentencia de mérito y atender a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria.

4. En ese sentido, en el Considerando **TERCERO** correspondiente a **ESTUDIO DE FONDO** de la ejecutoria dictada en el recurso de apelación identificado bajo el número de expediente **SX-RAP-64/2018**, la Sala Regional determinó lo que a continuación se transcribe:

“(…)

51. La imposición de la multa resulta indebida porque no específico las circunstancias particulares ni las relativas al tiempo, modo y lugar de la ejecución de los hechos, ni aspectos como la condición económica del partido y sus compromisos de pago, así como la reincidencia y el dolo en la comisión de las conductas.

52. Dichos argumentos se abordarán en el orden propuesto, puesto al ser el primero de ellos de carácter formal, de resultar fundado ello bastaría para revocar de plano la sentencia impugnada; de ahí que sería innecesario pronunciarse respecto del agravio restante.

(...)

53. En consideración de esta Sala Regional, el agravio relativo a la falta de exhaustividad y congruencia e indebida fundamentación y motivación en la resolución impugnada resulta **fundado**, por lo que se explica.

(...)

68. En el caso, las conclusiones impugnadas son faltas de carácter sustancial o de fondo, por la omisión del partido actor —en lo individual y como parte de la coalición “Por Chiapas al Frente”— de realizar el registro contable de diversas operaciones en el periodo de ajuste, en tiempo real, excediendo los días posteriores en que se realizó la operación. Lo cual vulnera lo establecido en el artículo 38, apartado 1, del Reglamento de Fiscalización.

69. Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que el partido actor acepta que efectivamente realizó el registro de sus operaciones de forma extemporánea, por lo cual el motivo de la falta no es litis en el presente asunto.

70. No obstante, como se adelantó, sus agravios están encaminados a controvertir el monto involucrado, pues en su consideración los importes que son materia de sanción se encuentran duplicados.

71. Al respecto, conviene señalar que de conformidad con lo establecido en los anexos del Dictamen Consolidado “MC_OBS” y “COAPCF_OBS”, el monto involucrado en cada una de las conclusiones es de \$1,022,393.70 y \$1,022,393.80, respectivamente, como se precisa en la siguiente tabla:

Conclusión 7_C6_P3	Conclusión 10_C11_P3
Anexo “MC_OBS” Correspondiente al oficio núm. INE/UTF/DA/32829/18 “Periodo de Ajuste <i>Se observaron registros contables en periodo de ajuste, que se consideran extemporáneos toda vez que exceden los tres días posteriores a la realización de las operaciones, lo anterior derivado de la revisión efectuada a la información presentada en el SIF, las cuales debieron haberse registrado dentro de los tres días posteriores a que se refiere los documentos que amparan las operaciones, por un monto de \$1,022,393.70. Lo anterior se detalla en el ANEXO 12_P3 del presente Dictamen.</i> <i>Se solicita presentar en el SIF si así lo considera conveniente, las aclaraciones que a su derecho convengan.</i> <i>Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5, del RF”.</i>	Anexo “COAPCF_OBS” Correspondiente al oficio núm. INE/UTF/DA/36560/18 “Periodo de Ajuste <i>Se observaron registros contables en periodo de ajuste, que se consideran extemporáneos toda vez que exceden los tres días posteriores a la realización de las operaciones, lo anterior derivado de la revisión efectuada a la formación presentada en el SIF, las cuales debieron haberse registrado dentro de los tres días posteriores a que se refiere los documentos que amparan las operaciones, por un monto de \$1,022,393.80. Lo anterior se detalla en el Anexo 18_P3 del presente Dictamen.</i> <i>Se solicita presentar en el SIF si así lo considera conveniente, las aclaraciones que a su derecho convengan.</i> <i>Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5, del RF”.</i>

72. Tales montos, como se aprecia de lo determinado por la autoridad fiscalizadora, corresponden a los documentos que amparan las operaciones, que se encuentran detallados en el “ANEXO 12_P3” y “Anexo 18_P3”, respectivamente.

(...)

74. Del contenido de dichos anexos se advierte que cada una de las operaciones, que conforman el monto involucrado, se encuentra identificada con un “ID Contabilidad”, el cargo y candidato con el que se encuentra relacionada, la referencia contable, el respectivo importe, así como la fecha de la operación y del registro.

75. En ese sentido, si la autoridad fiscalizadora señaló en los respectivos anexos del Dictamen Consolidado que cada operación corresponde a los montos que en dichos anexos se precisan, para que tal determinación sea conforme a Derecho, dichos montos efectivamente deben corresponder con las pólizas y facturas que se encuentran en el SIF.

(...)

77. En efecto, como se advierte del comparativo señalado, en cada operación, - que fue identificado por el número de “ID Contabilidad” – no corresponde su monto con la cantidad que señaló la autoridad fiscalizadora, pues en todos los casos la cantidad que se facturó se duplica respecto a la señalada el monto del “cargo” y “abono” que corresponda a la póliza.

78. Ello ocurrió porque la autoridad fiscalizadora indebidamente consideró como monto de la operación de la cantidad total de los cargos y abonos de la póliza, lo cual resulta indebido porque no corresponde con el monto real de la operación, esto es, con el gasto que ampara la factura.

(...)

83. Tal situación la debió advertir la autoridad pues el monto involucrado en la sanción debe reflejar de forma fiel el monto de las operaciones que indebidamente el sujeto obligado registró fuera de tiempo.

84. De tal suerte, es evidente para este órgano jurisdiccional que la autoridad fiscalizadora incurrió en una indebida motivación derivada de una falta de exhaustividad en el análisis de la documentación que ampara cada operación que conforma el monto involucrado en cada una de las operaciones.

(...)”

5. Que, en coherencia al análisis desarrollado por el citado órgano jurisdiccional, dentro de la sentencia emitida en el expediente **SX-RAP-64/2018**, en el Considerando **CUARTO**, específicamente en el apartado denominado “**Efectos**”, la Sala Regional determinó lo que a la letra se transcribe:

“(...

86. Esta Sala Regional considera que al resultar sustancialmente **fundados** los agravios precisados en la parte considerativa de esta sentencia, se debe **revocar el Dictamen Consolidado y la respectiva resolución impugnada**,

únicamente en cuanto a las conclusiones impugnadas, con fundamento en el artículo 47, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; en los términos siguientes:

- Se **revocan** las **conclusiones 7-C6-P3 y 10-C11-P3** del Dictamen Consolidado relativo al estado de Chiapas y de la resolución impugnada, para el efecto de que la autoridad responsable emita una nueva resolución de manera exhaustiva, fundada y motivada, en la que considere que los montos involucrados deben reflejar fielmente el monto real de la operación, esto es, el monto que se ampare en cada factura.

87. En tal sentido, se ordena al Consejo General del INE que emita una diversa resolución, tomando en cuenta lo expuesto en la parte considerativa de esta ejecutoria.

(...)”

6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional.

Ahora bien, de la lectura del recurso de apelación identificado con el número de expediente como **SX-RAP-64/2018**, se desprende que, con relación a los Considerandos **33.6 y 33.12**, incisos **e)**, conclusiones **7_C6_P3** y **10_C11_P3**, de la Resolución **INE/CG1107/2018**, la Sala Regional ordenó a esta autoridad emitir una nueva determinación en la que se imponga la sanción en la que considere que los montos involucrados deban reflejar fielmente el monto real de la operación, esto es, el monto que se ampare en cada factura; por lo que se procederá a acatar la sentencia referida, para lo cual se realizarán las siguientes modificaciones en congruencia con el sentido de la ejecutoria de mérito:

Conclusión 7_C6_P3	
Conclusión original	“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 31 operaciones en el periodo de ajuste, en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$1,022,393.70.”
Efectos	Emitir una nueva determinación en la que se imponga la sanción en la que considere que los montos involucrados deban reflejar fielmente el monto real de la operación, esto es, el monto que se ampare en cada factura.
Acatamiento	Se procederá a emitir una nueva sanción de la conclusión 7_C6_P3, tomando como base para realizar el cálculo de la misma, el monto involucrado que asciende a \$511,196.85 (Quinientos once mil ciento noventa y seis pesos 85/100 M.N.).

Conclusión 10_C11_P3	
Conclusión original	"El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 9 operaciones en el periodo de ajuste, en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$1,022,393.80"
Efectos	Emitir una nueva determinación en la que se imponga la sanción en la que considere que los montos involucrados deban reflejar fielmente el monto real de la operación, esto es, el monto que se ampare en cada factura.
Acatamiento	Se procederá a emitir una nueva sanción de la conclusión 10_C11_P3, tomando como base para realizar el cálculo de la misma, el monto involucrado que asciende a \$511,196.90 (Quinientos once mil ciento noventa y seis pesos 90/100 M.N.).

7. Modificación al Dictamen INE/CG1105/2018.

En cumplimiento con lo mandatado por la Sala Regional Xalapa, se procede a modificar la Resolución **INE/CG1105/2018**, respecto a las conclusiones **7_C6_P3** y **10_C11_P3**, correspondiente a las observaciones hechas a Movimiento Ciudadano y a la Coalición "Por Chiapas al Frente", en los siguientes términos:

"(...)

7. Movimiento Ciudadano

(...)

Periodo de Ajuste

Se observaron registros contables en periodo de ajuste, que se consideran extemporáneos toda vez que exceden los tres días posteriores a la realización de las operaciones; lo anterior, derivado de la revisión efectuada a la información presentada en el SIF, las cuales debieron haberse registrado dentro de los tres días posteriores a que se refiere los documentos que amparan las operaciones, por un monto de \$1,022,393.70.

Se solicita presentar en el SIF si así lo considera conveniente, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5, del RF.

Escrito de respuesta

Aun cuando el Partido Movimiento Ciudadano presenta escrito S/N de fecha 15 de julio, omitió presentar respuesta o documentación alguna a la presente observación.

Véase **Anexo R1-P3** del presente Dictamen.

Análisis

Del análisis a la información registrada en el SIF, como respuesta al oficio de errores y omisiones, se constató que el sujeto obligado registró operaciones que excedieron los tres días posteriores a su realización, como se muestra en el Anexo 12_P3 del presente Dictamen.

Es importante señalar, que resulta materialmente imposible tener por subsanada la falta observada, pues la temporalidad del registro de las operaciones calificadas de extemporáneas es anterior a aquella en que se hace del conocimiento dicha falta al sujeto obligado, toda vez que el registro de operaciones lo realiza en el periodo de correcciones en respuesta al oficio de errores y omisiones, lo cual no puede ser considerado como un cumplimiento a lo ordenado por la norma sustantiva, sino que, por el contrario, dicho registro extemporáneo constituye en sí mismo la transgresión a lo ordenado por la norma, en tal sentido dicha hipótesis normativa no puede retrotraerse a través de una conducta observada al sujeto obligado.

Lo anterior es así, toda vez que, es obligación de los sujetos obligados en registrar las operaciones en la temporalidad que señala la normatividad, esto es, dentro de los plazos que la propia norma establece.

No obstante, lo anterior, una vez analizado todos y cada uno de los registros realizados en el Sistema Integral de Fiscalización, esta autoridad obtuvo certeza respecto a que las operaciones materia del presente apartado no fueron registrados en el periodo respectivo, siendo que dicho sistema es la herramienta informática que hace prueba plena para la autoridad de lo ahí registrado y de la documentación exhibida por los sujetos obligados.

Ahora bien, derivado de la naturaleza de la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos efectuados durante la campaña, en la temporalidad señalada, la omisión en el cumplimiento per se no es una falta subsanable, pues

en el mismo momento en que el sujeto obligado no realiza el debido registro dentro de los plazos específicos y a través del medio que establece la normativa electoral, queda configurada la infracción.

Al respecto resulta dable destacar que el sistema normativo electoral regula los distintos procedimientos electorales bajo un sistema de etapas y plazos a fin de que los actores políticos cuenten con una mayor seguridad jurídica respecto de la actuación de la autoridad y de su propia actividad política; es por ello que el reporte de los ingresos y gastos en el tiempo establecido para ello resulta esencial para dotar de mayor certeza el desarrollo de los procesos electorales.

Permitir que los sujetos registren operaciones en cualquier momento, vulnerando lo anterior, rompería el modelo de fiscalización al poner en riesgo el ejercicio de las facultades de la autoridad relativas al análisis y valoración de la totalidad de la información presentada por dichos sujetos con proximidad a la aprobación de los dictámenes y resoluciones, es por ello que los plazos referidos son de aplicación estricta en cada una de sus etapas, desde la presentación de los informes, hasta la notificación de los oficios de errores y omisiones, así como de la respuesta recaída a los mismos, con lo que se garantiza a los partidos políticos y candidatos la debida audiencia.

Para tal efecto, la Ley General de Partidos Políticos dispone en su artículo 80 las etapas involucradas en la fiscalización de las campañas, en aras de tutelar la integralidad que debe regir en todo el Proceso Electoral y de la revisión de los ingresos y gastos involucrados.

Al respecto, en el procedimiento de fiscalización de campañas se tutela la garantía de audiencia de los sujetos obligados mediante la notificación del oficio de errores y omisiones, siendo la respuesta que formulen al mismo el momento procesal oportuno para realizar las manifestaciones que consideren pertinentes y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador.

En apego a lo expuesto, en el marco de la revisión de los Informes de campaña, la autoridad fiscalizadora otorgó la garantía de audiencia al sujeto obligado, derivado de lo cual, en respuesta al oficio de errores y omisiones el partido reportó diversos ingresos y gastos.

No obstante, lo anterior, del análisis a los ingresos y gastos reportados en respuesta a dicho oficio de errores y omisiones, la autoridad fiscalizadora llegó a la

conclusión que el registro de dichas operaciones se había realizado de manera extemporánea, esto es, fuera de los plazos que establece el artículo 38 del Reglamento de Fiscalización.

Derivado de ello, es de destacarse que la garantía de audiencia debe ser entendida como la posibilidad de que el sujeto regulado presente ante esta autoridad argumentos y documentación que acrediten que cumplió en tiempo y forma con sus obligaciones en materia de fiscalización y no como una exención a ello, pues esto atentaría con la aplicación efectiva de las normas.

Permitir a los sujetos regulados registrar en cualquier momento las operaciones relativas a sus ingresos y gastos, so pretexto de realizar dichos registros en respuesta al oficio de errores y omisiones girado por la autoridad fiscalizadora, desincentivaría a los partidos políticos el cumplir en tiempo sus obligaciones.

No obstante, lo anterior, y tal como ha quedado previamente detallado, la omisión de registrar las operaciones en tiempo real, es una falta que por su propia naturaleza no es subsanable.

Al respecto, resulta aplicable por analogía, el criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SX-RAP-7-2016, mediante el cual determinó que el rebase del tope de gastos de campaña es la conclusión a la que llega el ente fiscalizador después de analizar el Informe respectivo, dado que a partir de la información que le es proporcionada por los sujetos obligados y el ejercicio de sus facultades de fiscalización, la autoridad se encuentra en posibilidad de establecer si aconteció algún rebase a los topes de gastos establecidos y, en su caso, el monto respectivo; motivo por el cual no es una observación que se formule en el oficio de errores y omisiones previsto en el artículo 80 numeral 1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley General de Partidos Políticos.

Lo anterior toda vez que, conforme a lo expuesto, fue precisamente de la documentación y registros realizados en el Sistema Integral de Fiscalización en respuesta al oficio de errores y omisiones, de donde la autoridad fiscalizadora contó con elementos para analizar si el sujeto obligado se había apegado o no a lo que establece la normatividad.

En consecuencia, al omitir realizar el registro contable de operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, dentro del periodo de ajuste por un importe de \$1,022,393.70; por tal razón, la observación **no quedó atendida**.

Conclusión 7_C6_P3

El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 31 operaciones en tiempo real excediendo los 3 días posteriores en que se realizó la operación, dentro del periodo de ajuste por un importe de \$1,022,393.70.

Falta concreta

Omisión de reportar en tiempo real (registro extemporáneo en el SIF).

Artículo que incumplió

Artículo 38 numerales 1 y 5 del RF.

Ahora bien, en consideración a los razonamientos hechos por la H. Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la ejecutoria, identificada con el número de expediente SX-RAP-64/2018, en el que se ordena a la autoridad responsable emita una nueva resolución, que sea exhaustiva, fundada y motivada, en la que considere que los montos involucrados deben reflejar fielmente el monto real de la operación, esto es, el monto que se ampare en cada factura, se hace la siguiente precisión:

Esta autoridad procedió a realizar un nuevo análisis de las pólizas registradas de manera extemporánea, correspondientes las contabilidades de los candidatos a presidentes municipales postulados por Movimiento Ciudadano, como resultado se determinó un nuevo importe al verificar que en cada póliza, el sujeto obligado registró el pasivo y el pago correspondiente al proveedor, por lo que al confirmarse la duplicidad en la lectura de dichos registros por parte de esta Autoridad, se procedió a recalcular el importe mismo que se detalla en las facturas integradas como se muestra a continuación:

REGISTRO DE OPERACIONES FUERA DE TIEMPO EN PERIODO DE AJUSTES									
Sujeto Obligado: Movimiento Ciudadano									
Cons.	ID Contabilidad	Cargo	Candidato	Folio Factura	Referencia Contable	Importe	Fecha de operación	Fecha de registro	Días Extern.
1	56333	PRESIDENTE MUNICIPAL	ALONSO GARCIA MENDOZA	261	P1C/PE-1/14-07-18	\$6,994.41	27/06/2018	14/07/2018	14
2	56333	PRESIDENTE MUNICIPAL	ALONSO GARCIA MENDOZA	940	P1C/PE-2/14-07-18	8,341.50	27/06/2018	14/07/2018	14
3	56334	PRESIDENTE MUNICIPAL	ROSA LOPEZ MORENO	1014	P1C/PE-1/14-07-18	7,667.95	27/06/2018	14/07/2018	14
4	56335	PRESIDENTE MUNICIPAL	AMILCAR ALFARO LOPEZ	941	P1C/PE-1/14-07-18	7,667.95	27/06/2018	14/07/2018	14
5	56336	PRESIDENTE MUNICIPAL	CIRO DIAZ SANCHEZ	944	P1C/PE-1/13-07-18	33,227.80	27/06/2018	13/07/2018	13
6	56363	PRESIDENTE MUNICIPAL	PEDRO DE LA CRUZ VILLALOBOS	960	P1C/PE-1/13-07-18	49,628.23	27/06/2018	13/07/2018	13
7	56363	PRESIDENTE MUNICIPAL	PEDRO DE LA CRUZ VILLALOBOS	278	P1C/PE-2/13-07-18	1,491.46	27/06/2018	13/07/2018	13
8	56364	PRESIDENTE MUNICIPAL	TEREZA DE JESUS MENDEZ BALCAZAR	962	P1C/PE-1/13-07-18	7,667.95	27/06/2018	13/07/2018	13
9	56366	PRESIDENTE MUNICIPAL	LUCIA DEL ROSARIO VAZQUEZ NIETO	954	P1C/PE-1/13-07-18	7,667.95	27/06/2018	13/07/2018	13
10	56367	PRESIDENTE MUNICIPAL	DANIEL ALEJANDRO TORRES MARROQUIN	1038	P1C/PE-1/13-07-18	51,119.69	27/06/2018	13/07/2018	13
11	56367	PRESIDENTE MUNICIPAL	DANIEL ALEJANDRO TORRES MARROQUIN	1038	P1C/PE-2/14-07-18	51,119.69	27/06/2018	14/07/2018	14
12	56367	PRESIDENTE MUNICIPAL	DANIEL ALEJANDRO TORRES MARROQUIN	1038	P1C/PE-3/14-07-18	-51,119.69	27/06/2018	14/07/2018	14
13	56368	PRESIDENTE MUNICIPAL	JEANETH PATRICIO RUIZ	948	P1C/PE-1/13-07-18	7,667.95	27/06/2018	13/07/2018	13
14	56369	PRESIDENTE MUNICIPAL	MARIA MERLE LOPEZ PATRICIO	961	P1C/PE-1/13-07-18	7,667.95	27/06/2018	13/07/2018	13
15	56370	PRESIDENTE MUNICIPAL	MARIA DE LOS ANGELES PIMENTEL JACOME	958	P1C/PE-1/14-07-18	7,667.95	27/06/2018	14/07/2018	14
16	56377	PRESIDENTE MUNICIPAL	JUAN DIAZ PEREZ	950	P1C/PE-1/14-07-18	7,667.95	27/06/2018	14/07/2018	14
17	56378	PRESIDENTE MUNICIPAL	FRANCISCO JAVIER CHAMBE MORALES	947	P1C/PE-1/13-07-18	123,923.42	27/06/2018	13/07/2018	13
18	56378	PRESIDENTE MUNICIPAL	FRANCISCO JAVIER CHAMBE MORALES	268	P1C/PE-2/13-07-18	11,543.75	27/06/2018	13/07/2018	13
19	56379	PRESIDENTE MUNICIPAL	LAURA LUZ ORTIZ GUILLEN	953	P1C/PE-1/13-07-18	7,667.95	27/06/2018	13/07/2018	13
20	56380	PRESIDENTE MUNICIPAL	MIGUEL ANGEL ALFARO PINTO	277	P1C/PE-1/14-07-18	3,275.40	27/06/2018	14/07/2018	14
21	56380	PRESIDENTE MUNICIPAL	MIGUEL ANGEL ALFARO PINTO	958	P1C/PE-2/14-07-18	22,284.44	27/06/2018	14/07/2018	14
22	56383	PRESIDENTE MUNICIPAL	MAIRETH ROBLERO BAMACA	955	P1C/PE-1/14-07-18	7,667.95	27/06/2018	14/07/2018	14
23	56384	PRESIDENTE MUNICIPAL	CESAR OSVALDO ARRIOLA BARRERA	942	P1C/PE-1/13-07-18	7,667.95	27/06/2018	13/07/2018	13
24	56385	PRESIDENTE MUNICIPAL	JUAN SANCHEZ TORRES	271	P1C/PE-1/13-07-18	16,246.81	27/06/2018	13/07/2018	13
25	56385	PRESIDENTE MUNICIPAL	JUAN SANCHEZ TORRES	951	P1C/PE-2/13-07-18	34,872.88	27/06/2018	13/07/2018	13

REGISTRO DE OPERACIONES FUERA DE TIEMPO EN PERIODO DE AJUSTES									
Sujeto Obligado: Movimiento Ciudadano									
Cons.	ID Contabilidad	Cargo	Candidato	Folio Factura	Referencia Contable	Importe	Fecha de operación	Fecha de registro	Días Extem.
26	56386	PRESIDENTE MUNICIPAL	MARCO ANTONIO CASTELLANOS ESPINOSA	276	P1C/PE-1/14-07-18	8,077.01	27/06/2018	14/07/2018	14
27	56386	PRESIDENTE MUNICIPAL	MARCO ANTONIO CASTELLANOS ESPINOSA	956	P1C/PE-2/14-07-18	7,258.90	27/06/2018	14/07/2018	14
28	56387	PRESIDENTE MUNICIPAL	MARIA GUADALUPE GONZALEZ RAMOS	959	P1C/PE-1/13-07-18	7,667.95	27/06/2018	13/07/2018	13
29	56389	PRESIDENTE MUNICIPAL	MARIA LUISA FIAYO RAMIREZ	960	P1C/PE-1/13-07-18	8,752.30	27/06/2018	13/07/2018	13
30	56389	PRESIDENTE MUNICIPAL	MARIA LUISA FIAYO RAMIREZ	279	P1C/PE-2/13-07-18	6,583.61	27/06/2018	13/07/2018	13
31	56402	PRESIDENTE MUNICIPAL	ROSBITA MERCEDES ESPINOSA CASTILLEJOS	961	P1C/PE-1/13-07-18	25,559.84	27/06/2018	13/07/2018	13
Total						\$511,196.85			

Por lo anterior, a continuación se detalla el nuevo monto de la siguiente manera:

Conclusión	Registros extemporáneos	Importe
7_C6_P3	31	\$ 511,196.85

En consecuencia, al omitir realizar el registro contable de 31 operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, dentro del periodo de ajuste por un importe de \$511,196.85, la observación **no quedó atendida**.

Conclusión 7_C6_P3

El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 31 operaciones en tiempo real excediendo los 3 días posteriores en que se realizó la operación por un importe de \$511,196.85.

Falta concreta

Omisión de reportar en tiempo real (registro extemporáneo en el SIF).

Artículo que incumplió

Artículo 38 numerales 1 y 5 del RF.

10. COA “POR CHIAPAS AL FRENTE”

(...)

Periodo de Ajuste

Se observaron registros contables en periodo de ajuste, que se consideran extemporáneos toda vez que exceden los tres días posteriores a la realización de las operaciones, lo anterior derivado de la revisión efectuada a la información presentada en el SIF, las cuales debieron haberse registrado dentro de los tres días posteriores a que se refiere los documentos que amparan las operaciones, por un monto de \$1, 022,393.80.

Se solicita presentar en el SIF si así lo considera conveniente, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5, del RF.

Escrito de respuesta

Aun cuando la COA “Por Chiapas al Frente” presenta escrito S/N de fecha 15 de julio, omitió presentar respuesta o documentación alguna a la presente observación.

Véase **ANEXO R1_P3** del presente Dictamen

Análisis

Del análisis a la información registrada en el SIF, como respuesta al oficio de errores y omisiones, se constató que el sujeto obligado registró operaciones que excedieron los tres días posteriores a su realización, como se muestra en el Anexo 18_P3 del presente Dictamen.

Es importante señalar, que resulta materialmente imposible tener por subsanada la falta observada, pues la temporalidad del registro de las operaciones calificadas

de extemporáneas es anterior a aquella en que se hace del conocimiento dicha falta al sujeto obligado, toda vez que el registro de operaciones lo realiza en el periodo de correcciones en respuesta al oficio de errores y omisiones, lo cual no puede ser considerado como un cumplimiento a lo ordenado por la norma sustantiva, sino que, por el contrario, dicho registro extemporáneo constituye en sí mismo la transgresión a lo ordenado por la norma, en tal sentido dicha hipótesis normativa no puede retrotraerse a través de una conducta observada al sujeto obligado.

Lo anterior es así, toda vez que, es obligación de los sujetos obligados en registrar las operaciones en la temporalidad que señala la normatividad, esto es, dentro de los plazos que la propia norma establece.

No obstante, lo anterior, una vez analizado todos y cada uno de los registros realizados en el Sistema Integral de Fiscalización, esta autoridad obtuvo certeza respecto a que las operaciones materia del presente apartado no fueron registrados en el periodo respectivo, siendo que dicho sistema es la herramienta informática que hace prueba plena para la autoridad de lo ahí registrado y de la documentación exhibida por los sujetos obligados.

Ahora bien, derivado de la naturaleza de la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos efectuados durante la campaña, en la temporalidad señalada, la omisión en el cumplimiento per se no es una falta subsanable, pues en el mismo momento en que el sujeto obligado no realiza el debido registro dentro de los plazos específicos y a través del medio que establece la normativa electoral, queda configurada la infracción.

Al respecto resulta dable destacar que el sistema normativo electoral regula los distintos procedimientos electorales bajo un sistema de etapas y plazos a fin de que los actores políticos cuenten con una mayor seguridad jurídica respecto de la actuación de la autoridad y de su propia actividad política; es por ello que el reporte de los ingresos y gastos en el tiempo establecido para ello resulta esencial para dotar de mayor certeza el desarrollo de los procesos electorales.

Permitir que los sujetos registren operaciones en cualquier momento, vulnerando lo anterior, rompería el modelo de fiscalización al poner en riesgo el ejercicio de las facultades de la autoridad relativas al análisis y valoración de la totalidad de la información presentada por dichos sujetos con proximidad a la aprobación de los dictámenes y resoluciones, es por ello que los plazos referidos son de aplicación estricta en cada una de sus etapas, desde la presentación de los informes, hasta

la notificación de los oficios de errores y omisiones, así como de la respuesta recaída a los mismos, con lo que se garantiza a los partidos políticos y candidatos la debida audiencia.

Para tal efecto, la Ley General de Partidos Políticos dispone en su artículo 80 las etapas involucradas en la fiscalización de las campañas, en aras de tutelar la integralidad que debe regir en todo el Proceso Electoral y de la revisión de los ingresos y gastos involucrados.

Al respecto, en el procedimiento de fiscalización de campañas se tutela la garantía de audiencia de los sujetos obligados mediante la notificación del oficio de errores y omisiones, siendo la respuesta que formulen al mismo el momento procesal oportuno para realizar las manifestaciones que consideren pertinentes y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador.

En apego a lo expuesto, en el marco de la revisión de los Informes de campaña, la autoridad fiscalizadora otorgó la garantía de audiencia al sujeto obligado, derivado de lo cual, en respuesta al oficio de errores y omisiones el partido reportó diversos ingresos y gastos.

No obstante, lo anterior, del análisis a los ingresos y gastos reportados en respuesta a dicho oficio de errores y omisiones, la autoridad fiscalizadora llegó a la conclusión que el registro de dichas operaciones se había realizado de manera extemporánea, esto es, fuera de los plazos que establece el artículo 38 del Reglamento de Fiscalización.

Derivado de ello, es de destacarse que la garantía de audiencia debe ser entendida como la posibilidad de que el sujeto regulado presente ante esta autoridad argumentos y documentación que acrediten que cumplió en tiempo y forma con sus obligaciones en materia de fiscalización y no como una exención a ello, pues esto atentaría con la aplicación efectiva de las normas.

Permitir a los sujetos regulados registrar en cualquier momento las operaciones relativas a sus ingresos y gastos, so pretexto de realizar dichos registros en respuesta al oficio de errores y omisiones girado por la autoridad fiscalizadora, desincentivaría a los partidos políticos el cumplir en tiempo sus obligaciones.

No obstante, lo anterior, y tal como ha quedado previamente detallado, la omisión de registrar las operaciones en tiempo real, es una falta que por su propia naturaleza no es subsanable.

Al respecto, resulta aplicable por analogía, el criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SX-RAP-7-2016, mediante el cual determinó que el rebase del tope de gastos de campaña es la conclusión a la que llega el ente fiscalizador después de analizar el Informe respectivo, dado que a partir de la información que le es proporcionada por los sujetos obligados y el ejercicio de sus facultades de fiscalización, la autoridad se encuentra en posibilidad de establecer si aconteció algún rebase a los topes de gastos establecidos y, en su caso, el monto respectivo; motivo por el cual no es una observación que se formule en el oficio de errores y omisiones previsto en el artículo 80 numeral 1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley General de Partidos Políticos.

Lo anterior toda vez que, conforme a lo expuesto, fue precisamente de la documentación y registros realizados en el Sistema Integral de Fiscalización en repuesta al oficio de errores y omisiones, de donde la autoridad fiscalizadora contó con elementos para analizar si el sujeto obligado se había apegado o no a lo que establece la normatividad.

En consecuencia, al omitir realizar el registro contable de operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizaron las operaciones, dentro del periodo de ajuste por un importe de \$1, 022,393.80; por tal razón, la observación **no quedó atendida**.

Conclusión 10_C11_P3

El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de nueve operaciones en tiempo real excediendo los 3 días posteriores en que se realizó la operación, dentro del periodo de ajuste por un importe de \$1,022,393.80.

Falta concreta

Omisión de reportar en tiempo real (registro extemporáneo en el SIF).

Artículo que incumplió

Artículo 38, numerales 1 y 5, del RF.

En ese sentido, en observancia a los razonamientos hechos por la H. Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la ejecutoria, identificada con el número de expediente SX-RAP-64/2018, en el que se ordena a la autoridad responsable emita una nueva resolución, que sea exhaustiva, fundada y motivada, en la que considere que los montos involucrados deben reflejar fielmente el monto real de la operación, esto es, el monto que se ampare en cada factura, se hace la siguiente precisión:

Esta autoridad procedió a realizar un nuevo análisis de las pólizas registradas de manera extemporánea, correspondientes las contabilidades de los candidatos a Diputados postulados por la Coalición por Chiapas al Frente, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución democrática y Movimiento Ciudadano, como resultado se determinó un nuevo importe al verificar que en cada póliza, el sujeto obligado registró el pasivo y el pago correspondiente al proveedor, por lo que al confirmarse la duplicidad en la lectura de dichos registros por parte de esta Autoridad, se procedió a recalcular el importe, como se muestra a continuación:

REGISTRO DE OPERACIONES FUERA DE TIEMPO EN PERIODO DE AJUSTES									
Anexo 18_P3									
Sujeto Obligado: Coalición "Por Chiapas al Frente"									
Cons.	ID Contabilidad	Cargo	Candidato	Folio Factura	Referencia Contable	Importe	Fecha de operación	Fecha de registro	Días Externos
1	57284	Diputado Local	Isabel Gomez Lopez	943	P1C/PE-1/12-07-18	\$51,119.69	12/07/2018	27/06/2018	12
2	57290	Diputado Local	Mariano Jordan Dominguez Gomez	938	P1C/PE-1/12-07-18	28,759.49	12/07/2018	27/06/2018	12
3	57290	Diputado Local	Mariano Jordan Dominguez Gomez	942	P1C/PE-2/12-07-18	22,360.20	12/07/2018	27/06/2018	12
4	57294	Diputado Local	Sergio Rodriguez Elvira	949	P1C/PE-1/12-07-18	117,866.37	12/07/2018	27/06/2018	12
5	57294	Diputado Local	Sergio Rodriguez Elvira	269	P1C/PE-2/12-07-18	35,492.70	12/07/2018	27/06/2018	12
6	57337	Diputado Local	Claudia Lorena Gomez Giorgana	955	P1C/PE-1/12-07-18	153,359.07	12/07/2018	27/06/2018	12
7	57338	Diputado Local	Fabiola Isabel Sanchez Gomez	274	P1C/PE-1/13-07-18	51,119.69	13/07/2018	27/06/2018	13
8	59381	Diputado Local	Jesus Velasco Castillejos	945	P1C/PE-1/13-07-18	35,841.69	13/07/2018	27/06/2018	13
9	59381	Diputado Local	Jesus Velasco Castillejos	267	P1C/PE-2/13-07-18	15,278.00	13/07/2018	27/06/2018	13
Total						\$511,196.90			

Por lo anterior, se detalla el nuevo monto involucrado de la siguiente manera:

Conclusión	Registros extemporáneos	Importe	Referencia
10_C11_P3	9	\$ 511,196.90	Anexo 18_P3

En consecuencia, al omitir realizar el registro contable de 9 operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, dentro del periodo de ajuste por un importe de \$511,196.90, la observación **no quedó atendida**.

Falta concreta

Omisión de reportar en tiempo real (registro extemporáneo en el SIF).

Artículo que incumplió

Artículo 38, numerales 1 y 5, del RF.

Conclusión 7_C6_P3

El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 9 operaciones en tiempo real excediendo los 3 días posteriores en que se realizó la operación por un importe de \$511,196.90.

8. Modificación a la Resolución INE/CG1107/2018.

En cumplimiento con lo mandado por la Sala Regional se procede a modificar la Resolución **INE/CG1107/2018**, respecto a los Considerandos **33.6 y 33.12**, en lo tocante a los incisos **e)**, conclusiones **7_C6_P3** y **10_C11_P3**, correspondiente a la sanción que se impone a Movimiento Ciudadano y a la Coalición “Por Chiapas al Frente”, en los siguientes términos:

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS POSTULADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES A LOS CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS CORRESPONDIENTE AL

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, EN EL ESTADO DE CHIAPAS

(...)

33.6 MOVIMIENTO CIUDADANO

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del Informe de campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Chiapas, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado son las siguientes:

(...)

e) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 7-C2-P2 y 7_C6_P3.

A continuación, se desarrolla el apartado en comento:

(...)

e) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció las siguientes conclusiones sancionatorias infractoras del artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. Conclusiones **7-C2-P2** y **7_C6_P3**.

No.	Conclusión	Monto involucrado
7-C2-P2	<i>“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 18 operaciones del periodo de corrección en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$25,798.73.”</i>	\$25,798.73
7_C6_P3	<i>“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 31 operaciones en el periodo de ajuste, en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$511,196.85</i>	\$511,196.85

(...)

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando **22** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

(...)

Conclusión 7 C6 P3

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus operaciones en tiempo real, durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en omitir realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Chiapas, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$511,196.85 (Quinientos once mil ciento noventa y seis pesos 85/100 M.N.)**
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁸¹

⁸¹ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Asimismo, en atención a lo señalado por la Sala Regional Xalapa, en la sentencia recaída al expediente identificado con la clave alfanumérica SX-RAP-64/2018, para la imposición de la sanción de la presente conclusión, se tomará como base para realizar el cálculo del monto involucrado que asciende a **\$511,196.85 (Quinientos once mil ciento noventa y seis pesos 85/100 M.N.)**

Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al 15% (quince por ciento) sobre el monto total de las operaciones registradas fuera de tiempo real, que en la especie asciende a un total de **\$76,679.52 (Setenta y seis mil seiscientos setenta y nueve pesos 52/100 M.N.)**

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer a Movimiento Ciudadano, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción de hasta el 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$76,679.52 (Setenta y seis mil seiscientos setenta y nueve pesos 52/100 M.N.)**

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la

caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

(...)

33.12 COALICIÓN “POR CHIAPAS AL FRENTE”

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del Informe de campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Chiapas, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado son las siguientes:

(...)

e) 6 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 10_C4_P2, 10_C5_P3, 10_C10_P3, 10_C11_P3, 10_C17_P3 y 10_C18_P3

A continuación, se desarrolla el apartado en comento:

(...)

e) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias infractoras del artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. Conclusiones 10_C4_P2, 10_C5_P3, 10_C10_P3, 10_C11_P3, 10_C17_P3 y 10_C18_P3

No.	Conclusión	Monto involucrado
10_C4_P2	<i>“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de una operación en el periodo normal, en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$174,000.00”</i>	\$174,000.00

No.	Conclusión	Monto involucrado
10_C5_P3	<i>"El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de siete operaciones en el periodo de ajuste, en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$290,356.61"</i>	\$ 290,356.61
10_C10_P3	<i>"El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de tres operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$117,645.80"</i>	\$117,645.80
10_C11_P3	<i>El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 9 operaciones en el periodo de ajuste, en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$511,196.90</i>	\$511,196.90
10_C17_P3	<i>El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de una operación en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación en periodo normal, por un importe de \$38,500.00</i>	\$38,500.00
10_C18_P3	<i>El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 12 operaciones en el periodo de ajuste, en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$673,763.20</i>	\$673,763.20.

(...)

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando **22** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

(...)

Conclusión 10 C11 P3

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus operaciones en tiempo real, durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en omitir realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Chiapas, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.

- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$511.196.90 (Quinientos once mil ciento noventa y seis pesos 90/100 M.N.)**
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁸²

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

⁸¹ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Asimismo, en atención a lo señalado por la Sala Regional Xalapa, en la sentencia recaída al expediente identificado con la clave alfanumérica SX-RAP-64/2018, para la imposición de la sanción de la presente conclusión, se tomará como base para realizar el cálculo del monto involucrado que asciende a **\$511.196.90 (Quinientos once mil ciento noventa y seis pesos 90/100 M.N.)**

Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al 15% (quince por ciento) sobre el monto total de las operaciones registradas fuera de tiempo real, que en la especie asciende a un total de **\$76,679.53 (Setenta y seis mil seiscientos setenta y nueve pesos 53/100 M.N.)**

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Acción Nacional** en lo individual lo correspondiente al **44.36%** (cuarenta y cuatro punto treinta y seis por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción hasta del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$34,015.04 (treinta y cuatro mil quince pesos 04/100 M.N.)**.

Asimismo, al **Partido de la Revolución Democrática** en lo individual lo correspondiente al **44.57%** (cuarenta y cuatro punto cincuenta y siete por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción hasta del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$34,176.06 (treinta y cuatro mil ciento setenta y seis pesos 06/100 M.N.)**.

Del mismo modo, a **Movimiento Ciudadano** en lo individual lo correspondiente al **11.06%** (once punto cero seis por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción hasta del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$8,480.75 (ocho mil cuatrocientos ochenta pesos 75/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

(...)

RESUELVE

(...)

SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando **33.6** de la presente Resolución, se imponen a **Movimiento Ciudadano**, las sanciones siguientes:

(...)

e) 2 Faltas de carácter de fondo: Conclusiones 7-C2-P2 y 7_C6_P3

(...)

Conclusión 7 C6 P3.

Una reducción de hasta el **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$76,679.52 (Setenta y seis mil seiscientos setenta y nueve pesos 52/100 M.N.)**

(...)”

DÉCIMO SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 33.12 de la presente Resolución, se imponen a la **Coalición “Por Chiapas al Frente”**, las siguientes sanciones:

(...)

e) 6 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 10_C4_P2, 10_C5_P3, 10_C10_P3, 10_C11_P3, 10_C17_P3 y 10_C18_P3

(...)

Conclusión 10_C11_P3

Partido Acción Nacional

Una reducción hasta del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$34,015.04 (treinta y cuatro mil quince pesos 04/100 M.N.)**.

Partido de la Revolución Democrática

Una reducción hasta del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento 1438 de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$34,176.06 (treinta y cuatro mil ciento setenta y seis pesos 06/100 M.N.)**.

Movimiento Ciudadano

Una reducción hasta del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$8,480.75 (ocho mil cuatrocientos ochenta pesos 75/100 M.N.)**.

(...)"

9. Que la sanción originalmente impuesta a Movimiento Ciudadano, en los Considerandos **33.6** y **33.12** de los Resolutivos **SEXTO** y **DÉCIMO SEGUNDO** de la Resolución **INE/CG1107/2018**, tuvo modificaciones que se reflejan de la siguiente manera:

Resolución INE/CG1107/2018		Acuerdo por el que se da cumplimiento al SX-RAP-64/2018	
Conclusión 7_C6_P3	Sanción	Conclusión 7_C6_P3	Sanción
“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 31 operaciones en el periodo de ajuste, en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$1,022,393.70).”	<p>Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 33.6 de la presente Resolución, se imponen a Movimiento Ciudadano, las sanciones siguientes:</p> <p>e) 2 Faltas de carácter de fondo: Conclusiones 7-C2-P2 y 7_C6_P3</p> <p><u>Conclusión 7 C6 P3.</u></p> <p>Una reducción de hasta el 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$153,359.06 (ciento cincuenta y tres mil trescientos cincuenta y nueve pesos 06/100 M.N.).</p> <p>(...)</p>	“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 31 operaciones en el periodo de ajuste, en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$511,196.85”	<p>Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 33.6 de la presente Resolución, se imponen a Movimiento Ciudadano, las sanciones siguientes:</p> <p>e) 2 Faltas de carácter de fondo: Conclusiones 7-C2-P2 y 7_C6_P3</p> <p><u>Conclusión 7 C6 P3.</u></p> <p>Una reducción de hasta el 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$76,679.52 (Setenta y seis mil seiscientos setenta y nueve pesos 52/100 M.N.)</p> <p>(...)</p>

Resolución INE/CG1107/2018	Acuerdo por el que se da cumplimiento al SX-RAP-64/2018	Resolución INE/CG1107/2018	Acuerdo por el que se da cumplimiento al SX-RAP-64/2018
Conclusión 10_C11_P3	Sanción	Conclusión 10_C11_P3	Sanción
“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 9 operaciones en el periodo de ajuste, en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$1,022,393.80”	<p>Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 33.12 de la presente Resolución, se imponen a la Coalición “Por Chiapas al Frente”, las siguientes sanciones:</p> <p>e) 6 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 10_C4_P2, 10_C5_P3, 10_C10_P3, 10_C11_P3, 10_C17_P3 y 10_C18_P3</p>	“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 9 operaciones en el periodo de ajuste, en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$511,196.90”	<p>Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 33.12 de la presente Resolución, se imponen a la Coalición “Por Chiapas al Frente”, las siguientes sanciones:</p> <p>e) 6 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 10_C4_P2, 10_C5_P3, 10_C10_P3, 10_C11_P3, 10_C17_P3 y 10_C18_P3</p> <p>(...)</p>

Resolución INE/CG1107/2018	Acuerdo por el que se da cumplimiento al SX-RAP- 64/2018	Resolución INE/CG1107/2018	Acuerdo por el que se da cumplimiento al SX-RAP-64/2018
Conclusión 10_C11_P3	Sanción	Conclusión 10_C11_P3	Sanción
	<p>(...)</p> <p><u>Conclusión 10_C11_P3</u></p> <p>Partido Acción Nacional</p> <p>Una reducción hasta del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$68,030.08 (sesenta y ocho mil treinta pesos 08/100 M.N.).</p> <p>Partido de la Revolución Democrática</p> <p>Una reducción hasta del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento 1438 de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$68,352.14 (sesenta y ocho mil trescientos cincuenta y dos pesos 14/100 M.N.).</p> <p>Movimiento Ciudadano</p> <p>Una reducción hasta del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de</p>		<p><u>Conclusión 10_C11_P3</u></p> <p>Partido Acción Nacional</p> <p>Una reducción hasta del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$34,015.04 (treinta y cuatro mil quince pesos 04/100 M.N.).</p> <p>Partido de la Revolución Democrática</p> <p>Una reducción hasta del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento 1438 de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$34,176.06 (treinta y cuatro mil ciento setenta y seis pesos 06/100 M.N.).</p> <p>Movimiento Ciudadano</p> <p>Una reducción hasta del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$8,480.75 (ocho mil cuatrocientos ochenta</p>

<i>Resolución INE/CG1107/2018</i>	<i>Acuerdo por el que se da cumplimiento al SX-RAP- 64/2018</i>	<i>Resolución INE/CG1107/2018</i>	<i>Acuerdo por el que se da cumplimiento al SX-RAP-64/2018</i>
<i>Conclusión 10_C11_P3</i>	<i>Sanción</i>	<i>Conclusión 10_C11_P3</i>	<i>Sanción</i>
	\$16,946.18 (dieciséis mil novecientos cuarenta y seis pesos 18/100 M.N.). (...)"		pesos 75/100 M.N.). (...)"

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

A C U E R D A

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado **INE/CG1105/2018** y la Resolución **INE/CG1107/2018**, aprobados ambos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en fecha seis de agosto de dos mil dieciocho, en los términos precisados en los Considerandos **7** y **8** del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral informe a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral Federal, con sede en Xalapa, Veracruz, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SX-RAP-64/2018**.

TERCERO. Notifíquese el contenido del presente Acuerdo al **Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano**.

CUARTO. Se instruye al Organismo Público Electoral del Estado de Chiapas que en términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas con base en la capacidad económica estatal, sean destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables.

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1266/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA REGIONAL XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SX-RAP-66/2018, INTERPUESTO POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, EN CONTRA DEL DICTAMEN CONSOLIDADO INE/CG1105/2018 Y LA RESOLUCIÓN INE/CG1107/2018

ANTECEDENTES

I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. El seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado **INE/CG1105/2018** y la Resolución **INE/CG1107/2018**, respecto a las irregularidades encontradas de la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos postulados por los Partidos Políticos y Coaliciones a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos correspondiente al Proceso Electoral Local ordinario 2017-2018, en el estado de Chiapas.

II. Recurso de apelación. Inconforme con lo anterior, el diez de agosto del presente año, el Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General de este Instituto, interpuso recurso de apelación para controvertir la parte conducente del Dictamen Consolidado **INE/CG1105/2018** y la Resolución **INE/CG1107/2018**, mismo que fue recibido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el quince del mismo mes y año, quedando registrado bajo el número de expediente **SUP-RAP-269/2018**.

Atento a lo anterior, el veintitrés de agosto siguiente, la Sala Superior dictó acuerdo de escisión en el que determinó, entre otras cosas, que la Sala Regional Xalapa es la autoridad competente para conocer y resolver los planteamientos en los que el Partido del Trabajo controvierte aspectos de fiscalización determinados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

En consecuencia, el día veinticinco del mismo mes y año, la Sala Regional con sede en Xalapa recibió el escrito de demanda y demás constancias relativas al recurso de apelación; consecuentemente, el Magistrado Presidente ordenó integrar el expediente y radicarlo bajo el número **SX-RAP-66/2018**, para los efectos legales conducentes.

III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, en sesión pública celebrada el treinta y uno de agosto del presente año, la Sala Regional resolvió el recurso referido, determinando lo que a la letra se transcribe:

*“**PRIMERO.** Se **revoca** la resolución impugnada **INE/CG1107/2018**, en lo que fue materia de impugnación, por lo que hace al estado de Chiapas, para los efectos precisados en el Considerando Décimo de esta ejecutoria.*

***SEGUNDO.** Se **ordena** al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que emita una nueva resolución, tomando en cuenta lo expuesto en la parte considerativa de esta ejecutoria. Asimismo, se le **vincula** para que informe a esta Sala Regional del cumplimiento dado a la presente sentencia, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.*

***TERCERO.** Infórmese a la Sala Superior de este Tribunal Electoral, el dictado de la presente sentencia, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo plenario de escisión correspondiente al recurso de apelación SUP-RAP-269/2018.*

***CUARTO.** Se **confirman**, en lo que fue materia de impugnación, las resoluciones impugnadas correspondientes a los estados de Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, en términos de los considerandos quinto a noveno de esta sentencia.”*

IV. Derivado de lo anterior, en la ejecutoria antes citada la Sala Regional resolvió modificar la Resolución **INE/CG1107/2018**, por cuanto hace a las conclusiones sancionatorias 12_C9_P3 y 12_C13_P3, correspondientes al Partido del Trabajo, a efecto que se realizará lo siguiente:

- Respecto de las conclusiones 12_C9_P3 y 12_C13_P3, imponer una nueva sanción realizando una nueva individualización las sanciones impuestas al advertir que la autoridad responsable consideró la capacidad económica con datos erróneos.

En ese sentido, considerando que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serán

definitivas e inatacables, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de Acuerdo correspondiente.

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44 numeral 1, incisos aa) y jj) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de los candidatos postulados por los Partidos Políticos y Coaliciones a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Chiapas.

2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones emitidas por las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso la recaída al Recurso de Apelación identificado con el número de expediente **SX-RAP-66/2018**.

3. Que la Sala Regional resolvió modificar la Resolución **INE/CG1107/2018**, emitida por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto a las irregularidades encontradas de la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos postulados por los Partidos Políticos y Coaliciones a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Chiapas, por lo que esta autoridad procede a la modificación de dicho documento, a fin de dar cumplimiento a los efectos precisados en la sentencia de mérito y atender a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria.

4. En ese sentido, en el Considerando **CUARTO**, correspondiente al **Estado de Chiapas**, de la ejecutoria dictada en el recurso de apelación identificado bajo el número de expediente **SX-RAP-66/2018**, la Sala Regional determinó lo que a continuación se transcribe:

“(…)

22. El recurrente señala que le causa agravio las sanciones impuestas respecto de las conclusiones que se insertan en el cuadro siguiente:

No.	Conclusión	Sanción
12_C9_P3	El sujeto obligado informó de manera extemporánea 530 eventos de la agenda de actos públicos, de manera posterior a su celebración	\$127,267.40 (ciento veintisiete mil doscientos sesenta y siete pesos 40/100 M.N).
12_C13_P3	El sujeto obligado informó de manera extemporánea 3,556 eventos de la agenda de actos públicos, de manera posterior a su celebración.	\$854,360.00 (ochocientos cincuenta y cuatro mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.)

23. Del escrito de demanda, se advierte que el apelante manifiesta que la autoridad emisora del acto reclamado, impone multas desproporcionadas en las citadas conclusiones al no considerar correctamente la capacidad económica del PT, lo que, a su juicio, es contrario a lo establecido en los artículos 1º, 14, 16, 22, 41, 116 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 23 de la Ley General de Partidos Políticos, 458 apartado 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales al incurrir en una indebida fundamentación y motivación al analizar la capacidad económica del recurrente.

(…)

28. El agravio es fundado y suficiente para revocar, en lo que es materia de impugnación la resolución impugnada, por las razones que se explican a continuación.

(…)

30. Ahora bien, la responsable determinó conforme a las resoluciones aprobadas el doce de febrero del año en curso, IEPC/CG-R/007/20184 y IEPC/CG-R008/2018 los porcentajes que cada partido político coaligado aportaría para los cargos de diputados y miembros del Ayuntamiento en el desarrollo de las campañas respectivas conforme a lo siguiente:

“(…)

Partido Político	Financiamiento público para gastos de campaña	Porcentaje de aportación de acuerdo al Convenio de Coalición. (Clausula 10ª)	Cantidad líquida de lo aportado por cada partido político	Porcentaje de aportación en relación al 100% de la cantidad líquida
Morena	\$8,762,301.32	30%	\$2,628,690.	33.80%
Partido del Trabajo	\$15,453,071.73	30%	\$4,635,921.	59.62 %
Partido Encuentro Social	\$1,703,989.61	30%	\$511,196.88	6.57%

Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, 'COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE'.

En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

(...)"

31. Sin embargo, del análisis del acuerdo IEPC/CGA/012/20187 por el que se fijó el financiamiento para actividades ordinarias, así como del diverso IEPC/CG-A/034/20188 por el que se determinó el monto y la distribución del financiamiento público para gastos de campaña, se advierte que la cantidad que fue designada al PT, para este último rubro fue la de \$1,703,989.61 (un millón setecientos tres mil novecientos ochenta y nueve pesos 61/100 M.N). y no la determinada por el Consejo General del INE, o sea la de \$15,453,071.73 (quince millones cuatrocientos cincuenta y tres mil setenta y un pesos 73/100 M.N) que fue considerada por el INE.

32. De ahí que esta Sala Regional estime que le asiste razón al recurrente, toda vez que el INE determinó la capacidad económica del infractor con base en una cantidad errónea.

33. De lo anterior, resulta evidente que la responsable tomó como monto de financiamiento para gastos de campaña la cantidad de \$15,453,071.73 (quince millones cuatrocientos cincuenta y tres mil setenta y un pesos 73/100 M.N.), la cual fue considerada de manera inexacta por el INE para calcular el 30% del financiamiento de gastos de campaña para la elección de Diputados

locales y Ayuntamientos, cuya cantidad ascendió indebidamente a \$4,635,921.52 (cuatro millones seiscientos treinta y cinco mil novecientos veintiún pesos 52/100M.N.).

34. Como consecuencia de lo anterior, lo procedente es **revocar** en lo que fue materia de impugnación, la resolución impugnada, a efecto de que la autoridad responsable **reindividualice** las sanciones **impuestas únicamente al PT y por lo que hace a las conclusiones referidas**, tomando en consideración la capacidad económica del recurrente conforme a lo razonado en el presente considerando.

(...)"

5. Que en congruencia al análisis desarrollado por el citado órgano jurisdiccional, dentro de la sentencia emitida en el expediente **SX-RAP-66/2018**, en el Considerando **DECIMO**, específicamente en el apartado denominado "**Efectos de la sentencia**", la Sala Regional determinó lo que a la letra se transcribe:

"(...)

313. Al haber resultado **fundados** los agravios hechos valer por el recurrente, únicamente respecto a la resolución **INE/CG1107/2018**, emitida por la autoridad responsable, lo procedente es, revocar en lo que fue materia de impugnación, a efecto de que la autoridad responsable reindividualice las sanciones impuestas únicamente por lo que hace al PT y a las conclusiones **12_C9_P3 y 12_C13_P3**, al advertir que la autoridad responsable consideró la capacidad económica con datos erróneos, en términos de lo razonado en el Considerando Cuarto de esta sentencia.

314. En consecuencia, se **ordena** al Consejo General del INE que emita una diversa resolución, tomando en consideración lo expuesto en la parte considerativa de esta ejecutoria.

(...)"

6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional.

Ahora bien, de la lectura del recurso de apelación identificado con el número de expediente como **SX-RAP-66/2018**, se desprende que, con relación al Considerando **33.13**, inciso **f**), conclusiones **12_C9_P3 y 12_C13_P3** de la Resolución **INE/CG1107/2018**, la Sala Regional ordenó a esta autoridad emitir una

nueva resolución en la que se reindividualice las sanciones impuestas únicamente por lo que hace al Partido del Trabajo y a las conclusiones **12_C9_P3** y **12_C13_P3**, al advertir que la autoridad responsable consideró la capacidad económica con datos erróneos; por lo que se procederá a acatar la sentencia referida, para lo cual se realizarán las siguientes modificaciones en congruencia con el sentido de la ejecutoria de mérito:

Conclusión 12_C9_P3	
Conclusión original	<i>“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 530 eventos de la agenda de actos públicos, de manera posterior a su celebración.”</i>
Efectos	Emitir una nueva resolución en la que se reindividualice la sanción impuesta únicamente por lo que hace al Partido del Trabajo, al advertir que la autoridad responsable consideró la capacidad económica con datos erróneos.
Acatamiento	Se procederá a emitir una nueva sanción de la conclusión 12_C9_P3, tomando como base para realizar el cálculo de la misma, la corrección del monto para la distribución del financiamiento público para gastos de campaña que fue designada al Partido del Trabajo equivalente a \$1,703,989.61 (un millón setecientos tres mil novecientos ochenta y nueve pesos 61/100 M.N.).

Conclusión 12_C13_P3.	
Conclusión original	<i>“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 3,556 eventos de la agenda de actos públicos, de manera posterior a su celebración.”</i>
Efectos	Emitir una nueva resolución en la que se reindividualice la sanción impuesta únicamente por lo que hace al Partido del Trabajo, al advertir que la autoridad responsable consideró la capacidad económica con datos erróneos.
Acatamiento	Se procederá a emitir una nueva sanción de la conclusión 12_C13_P3, tomando como base para realizar el cálculo de la misma, la corrección del monto para la distribución del financiamiento público para gastos de campaña que fue designada al Partido del Trabajo equivalente a \$1,703,989.61 (un millón setecientos tres mil novecientos ochenta y nueve pesos 61/100 M.N.).

7. Modificación a la Resolución INE/CG1107/2018.

En cumplimiento con lo mandatado por la Sala Regional se procede a modificar la Resolución **INE/CG1107/2018**, respecto al Considerando **33.13**, inciso **f**), conclusiones **12_C9_P3** y **12_C13_P3**, correspondiente a la sanción que se impone al Partido del Trabajo, manteniendo las sanciones impuestas a los demás integrantes de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, es decir, Morena y el Partido Encuentro Social, en los siguientes términos:

(...)

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS POSTULADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES A LOS CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, EN EL ESTADO DE CHIAPAS.

(...)

33.13 Coalición “Juntos Haremos Historia”

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del Informe de campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado son las siguientes:

(...)

f) 3 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 12_C2_P3, 12_C9_P3 y 12_C13_P3

A continuación, se desarrollan los apartados en comento:

(...)

f) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias infractoras del artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización: Conclusiones 12_C2_P3, 12_C9_P3 y 12_C13_P3.

No.	Conclusión
12_C2_P3	<i>“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 10</i>

No.	Conclusión
	<i>eventos de la agenda de actos públicos, de manera posterior a su celebración.”</i>
12_C9_P3	<i>“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 530 eventos de la agenda de actos públicos, de manera posterior a su celebración.”</i>
12_C13_P3	<i>“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 3,556 eventos de la agenda de actos públicos, de manera posterior a su celebración.”</i>

(...)

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando **22** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Además, debe tenerse en cuenta que, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Chiapas, se registró ante el Organismo Público Local la Coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por Morena y los partidos Encuentro Social y del Trabajo, para contender a diversos cargos de elección (24 Diputaciones locales y 123 municipios), para tal efecto, en el convenio de coalición correspondiente se estableció los montos de recursos que cada uno aportaría, como se muestra a continuación:

Coalición “Juntos Haremos Historia”

En sesiones de doce de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, aprobó las resoluciones **IEPC/CG-R/007/2018** y **IEPC/CG-R008/2018**, en las que se señalan los montos de financiamiento que aportara cada partido político coaligado para los cargos de Gobernador, diputados y miembros del Ayuntamiento en el desarrollo de las campañas respectivas en las que se establece lo siguiente:

Elección Gobernador:

Partido Político	Financiamiento público para gastos de campaña	Porcentaje de aportación de acuerdo al Convenio de Coalición. (Clausula 10ª)	Cantidad líquida de lo aportado por cada partido político	Porcentaje de aportación en relación al 100% de la cantidad líquida
Partido del Trabajo	\$1,703,989.61	70%	\$511,196.88	14%

Elección Diputados y Ayuntamientos:

Partido Político	Financiamiento público para gastos de campaña	Porcentaje de aportación de acuerdo al Convenio de Coalición. (Clausula 10ª)	Cantidad líquida de lo aportado por cada partido político	Porcentaje de aportación en relación al 100% de la cantidad líquida
Partido del Trabajo	\$1,703,989.61	30%	\$511,196.88	14 %

En ese orden de ideas, cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, **“COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE”**.

En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

Asimismo, es importante señalar el criterio orientador emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la sentencia recaída al recurso de apelación SUP-RAP-196-2017 y su acumulado, relativo a la responsabilidad compartida de todos los partidos integrantes de una coalición en las faltas que cometa el encargado de finanzas de la misma, el cual para mayor claridad se transcribe a continuación:

“(…)

*Son infundados los agravios porque contrario a lo que argumenta el partido apelante, **éste también es responsable de la comisión de las infracciones que en materia de fiscalización se le atribuyen a la Coalición, dado que formó parte de ésta para postular a un mismo candidato a Gobernador y conforme a lo estipulado en la Ley General de Partidos Políticos y el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, al celebrar el convenio de coalición respectivo, autorizó la creación de un “Órgano Estatal de Administración” encargado de las finanzas de ésta, integrado por los responsables de finanzas de los partidos coaligados, un representante designado por el candidato a gobernador y coordinado por el Titular de la Tesorería Estatal del Partido Acción Nacional, para que reportara la aplicación de la contribución del financiamiento público que aportó para la campaña electoral mediante los informes correspondientes, y por tanto, la actuación de dicho órgano, implicó que los actos que éste realizó en materia de fiscalización, los realizó a nombre de sus representados, de manera que válidamente pueden imputarse directamente a sus representados, y por tanto, la responsabilidad en la presentación de los informes de campaña es compartida por todos los integrantes de la coalición tal como se demuestra en apartado posterior.***

(...)

*En este sentido, lo estipulado en el convenio de coalición respecto a que cada una de las partes respondería en forma individual por las faltas en que incurriera alguno de los partidos suscriptores o sus militantes asumiendo la sanción correspondiente, debe entenderse respecto a aquellas que se cometan en una materia distinta a la fiscalización, **porque como se analizó el representante de finanzas de la coalición actuó en nombre y representación de todos los partidos coaligados en esta materia.***

*De igual modo, lo pactado en el convenio en cuanto a que “cada partido, sus precandidatos y candidatos, de forma individual responderá por las sanciones que imponga la Autoridad Electoral Fiscalizadora” debe entenderse como una responsabilidad que surge en el interior de la coalición para aportarle al representante de finanzas de la coalición toda la documentación necesaria para que éste pueda ejercer su función, en el entendido de que, como ya se explicó **las faltas que cometa dicho representante en materia de fiscalización se imputan a toda la coalición.***

(...). ”.

[Énfasis añadido]

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

Conclusión 12 C2 P3

(...)

Conclusión 12 C9 P3

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en el registro de eventos en el Sistema Integral de Fiscalización con anterioridad al plazo establecido en la normatividad electoral, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Chiapas, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Chiapas.
- Que el sujeto obligado reportó 530 eventos con posterioridad a su fecha de realización.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁸¹

⁸¹ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse a la Coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por Morena, el Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo, es de índole económica y equivale a **5 (cinco)** Unidades de Medida y Actualización por cada evento registrado de manera extemporánea, cantidad que asciende a un total de **\$202,628.40 (doscientos mil, seiscientos veintiocho pesos 40/100 M.N.)**

(...)

Asimismo, en atención a lo señalado por la Sala Regional Xalapa, en la sentencia recaída al expediente identificado con la clave alfanumérica SX-RAP-66/2018, para la imposición de la sanción de la presente conclusión por lo que hace al Partido del Trabajo, el porcentaje de aportación del partido referido dentro de la Coalición “Juntos Haremos Historia” será el **14%** (catorce por ciento).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer en lo individual es la correspondiente al **Partido del Trabajo** en lo individual lo correspondiente al **14%** (catorce por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción hasta del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$28,367.97 (veintiocho mil trescientos sesenta y siete pesos 97/100 M.N.)**.

(...)

Conclusión 12 C13 P3

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en el registro de eventos en el Sistema Integral de Fiscalización con anterioridad al plazo establecido en la normatividad electoral, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Chiapas, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Chiapas.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el sujeto obligado reportó 3,556 eventos con posterioridad a su fecha de realización
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en

el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁸²

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse a la Coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por Morena, el Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo, es de índole económica y equivale a **5 (cinco) Unidades de Medida y Actualización** por cada evento registrado de manera extemporánea, cantidad que asciende a un total de **\$1,432,826.20 (un millón cuatrocientos treinta y dos mil ochocientos veintiséis pesos 20/100 M.N.)**

(...)

Asimismo, en atención a lo señalado por la Sala Regional Xalapa, en la sentencia recaída al expediente identificado con la clave alfanumérica SX-RAP-66/2018, para la imposición de la sanción de la presente conclusión por lo que hace al Partido del Trabajo, el porcentaje de aportación del partido referido dentro de la Coalición “Juntos Haremos Historia” será el **14%** (catorce por ciento).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al **Partido del Trabajo** en lo individual lo correspondiente al **14%** (catorce por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a

⁸² Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

dicho instituto político es la reducción hasta del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$200,595.66 (doscientos mil quinientos noventa y cinco pesos 66/100 M.N.)**.

(...)

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

(...)

R E S U E L V E

(...)

DÉCIMO TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 33.13 de la presente Resolución, se imponen a la **Coalición “Juntos Haremos Historia”**, las sanciones siguientes

(...)

f) 3 Faltas de carácter sustancial: Conclusiones 12_C2_P3, 12_C9_P3 y 12_C13_P3.

Conclusión 12_C2_P3

(...)

Conclusión 12_C9_P3

(...)

Una reducción al **Partido del Trabajo** hasta del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$28,367.97 (veintiocho mil trescientos sesenta y siete pesos 97/100 M.N.)**.

(...)

Conclusión 12 C13 P3

(....)

Una reducción al **Partido del Trabajo** hasta del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$200,595.66 (doscientos mil quinientos noventa y cinco pesos 66/100 M.N.)**.

(...)”

8. Que la sanción originalmente impuesta al Partido del Trabajo, en el Considerando **33.13** y Resolutivo **DÉCIMO TERCERO** de la Resolución **INE/CG1107/2018**, tuvo modificaciones que se reflejan de la siguiente manera:

Resolución INE/CG1107/2018		Acuerdo por el que se da cumplimiento al SX-RAP-66/2018	
Conclusión 12 C9 P3	Sanción	Conclusión 12 C9 P3	Sanción
“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 530 eventos de la agenda de actos públicos, de manera posterior a su celebración.”	<p>Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 33.13 de la presente Resolución, se imponen a la Coalición “Juntos Haremos Historia”, las sanciones siguientes:</p> <p>(...)</p> <p>f) 3 Faltas de carácter sustancial: Conclusiones 12_C2_P3, 12_C9_P3 y 12_C13_P3.</p> <p>(...)</p>	“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 530 eventos de la agenda de actos públicos, de manera posterior a su celebración.”	<p>Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 33.13 de la presente Resolución, se imponen a Partido del Trabajo, las sanciones siguientes:</p> <p>(...)</p> <p>f) 3 Faltas de carácter sustancial: Conclusiones 12_C2_P3, 12_C9_P3 y 12_C13_P3.</p> <p>(...)</p> <p><u>Conclusión 12 C9 P3</u></p>

Resolución INE/CG1107/2018		Acuerdo por el que se da cumplimiento al SX-RAP-66/2018	
Conclusión 12_C9_P3	Sanción	Conclusión 12_C9_P3	Sanción
	<p><u>Conclusión 12_C9_P3</u></p> <p>(...)</p> <p>Una reducción al Partido del Trabajo hasta del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$127,267.40 (ciento veintisiete mil doscientos sesenta y siete pesos 40/100 M.N.).</p> <p>(...)</p>		<p>Una reducción al Partido del Trabajo hasta del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$28,367.97 (veintiocho mil trescientos sesenta y siete pesos 97/100 M.N.).</p> <p>(...)</p>

Resolución INE/CG1107/2018		Acuerdo por el que se da cumplimiento al SX-RAP-66/2018	
Conclusión 12_C13_P3	Sanción	Conclusión 12_C13_P3	Sanción
<p>"El sujeto obligado informó de manera extemporánea 3,556 eventos de la agenda de actos públicos, de manera posterior a su celebración."</p>	<p>Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 33.13 de la presente Resolución, se imponen a la Coalición "Juntos Haremos Historia", las sanciones siguientes:</p> <p>(...)</p> <p>f) 3 Faltas de carácter sustancial: Conclusiones 12_C2_P3, 12_C9_P3 y 12_C13_P3.</p> <p>(...)</p> <p><u>Conclusión 12_C13_P3</u></p> <p>(...)</p> <p>Una reducción al Partido del Trabajo hasta del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de</p>	<p>"El sujeto obligado informó de manera extemporánea 3,556 eventos de la agenda de actos públicos, de manera posterior a su celebración."</p>	<p>Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 33.13 de la presente Resolución, se imponen a la Coalición "Juntos Haremos Historia", las sanciones siguientes:</p> <p>(...)</p> <p>f) 3 Faltas de carácter sustancial: Conclusiones 12_C2_P3, 12_C9_P3 y 12_C13_P3.</p> <p>(...)</p> <p><u>Conclusión 12_C13_P3</u></p> <p>Una reducción al Partido del Trabajo hasta del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de</p>

Resolución INE/CG1107/2018		Acuerdo por el que se da cumplimiento al SX-RAP-66/2018	
Conclusión 12_C13_P3	Sanción	Conclusión 12_C13_P3	Sanción
	Financiamiento Público para el Sosténimiento de sus Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$854,360.00 (ochocientos cincuenta y cuatro mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N).		Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$200,595.66 (doscientos mil quinientos noventa y cinco pesos 66/100 M.N). (...)

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

A C U E R D A

PRIMERO. Se modifica la parte conducente de la Resolución **INE/CG1107/2018**, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en fecha seis de agosto de dos mil dieciocho, en los términos precisados en el Considerando **7** del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral informe a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral Federal, con sede en Xalapa, Veracruz, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SX-RAP-66/2018**.

TERCERO. Notifíquese el contenido del presente Acuerdo al **Partido del Trabajo**.

CUARTO. Se instruye al Organismo Público Electoral del Estado de Chiapas que en términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas con base en la capacidad económica estatal, sean destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables.

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1267/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA REGIONAL XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SX-RAP-74/2018

A N T E C E D E N T E S

I. En sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen Consolidado **INE/CG1161/2018**, así como la Resolución **INE/CG1162/2018**, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de Campaña de los ingresos y gastos de los Candidatos a los cargos de Gobernador, Diputado Local y Ayuntamiento correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Yucatán.

II. Recurso de Apelación. Inconforme con lo anterior, el catorce de agosto de dos mil dieciocho, el Partido Acción Nacional, a través de su Representante Propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, interpuso recurso de apelación para controvertir lo determinado en la Resolución INE/CG1162/2018, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

III. Escisión y reencauzamiento. El veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo plenario, la Sala Superior determinó escindir el citado recurso de apelación y remitirlo a la Sala Regional Xalapa para que conociera respecto de las impugnaciones relativa a las candidaturas a diputados locales y presidentes municipales de Yucatán.

IV. Turno. El veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, el Magistrado Presidente de la Sala Regional Xalapa acordó integrar el expediente SX-RAP-74/2018 y turnarlo a la ponencia del Magistrado Enrique Figueroa Ávila para los efectos legales correspondientes.

V. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, determinando en sus Resolutivos PRIMERO y SEGUNDO, lo que se transcribe a continuación:

*“PRIMERO. Se **revoca** la resolución controvertida, en lo que fue materia de impugnación para los efectos precisados en el Considerando Cuarto de esta ejecutoria.*

*SEGUNDO. Se **ordena** al Consejo general de Instituto Nacional Electoral que emita una nueva resolución, tomando en cuenta en la parte considerativa de esta ejecutoria. Asimismo, se le **vincula** para que informe a esta Sala del cumplimiento dado a la presente sentencia, dentro de las veinticuatro horas de que ello ocurra.*

(...)”

Lo anterior, a efecto de que la autoridad responsable emita un nuevo Dictamen Consolidado, así como un nuevo Acuerdo, siguiendo los Lineamientos indicados en la parte considerativa de la sentencia en comento, toda vez que dicho órgano jurisdiccional determinó revocar las conclusiones 1_C10_P1 y 1_C16_P1 correspondientes al Partido Acción Nacional para los siguientes efectos:

“QUINTO. Efectos

*Al haber resultado **parcialmente fundado** el agravio relativo a la conclusión 1_C10_P1, lo procedente es **revocar**, en lo que fue materia de impugnación, la Resolución controvertida para el efecto que la autoridad responsable tenga como reportado el registro contable del inmueble utilizado como casa de campaña correspondiente al candidato Ricardo Ordoñez Chan y, en consecuencia, reindividualice la sanción impuesta.*

*Asimismo, por lo que hace a la conclusión 1_C16_P1, al advertir que carece de fundamentación y motivación, se **revoca lisa y llanamente**.*

En consecuencia, se ordena al Consejo General del INE que emita una diversa resolución, tomando en cuenta lo expuesto en la parte considerativa de esta ejecutoria.

(...)”

En otras palabras, **revocó las faltas de fondo: 1_C10_P1 y 1_C16_P1**, para el efecto de re individualizar la primera conclusión y dejar sin efectos la segunda conclusión.

VI. Derivado de lo anterior, y toda vez que el recurso de apelación SX-RAP-74/2018, tuvo por efecto revocar el Dictamen Consolidado INE/CG1161/2018 y la Resolución INE/CG1162/2018, en relación a las conclusiones **C_10_P1 y C_16_P1** del Partido Acción Nacional en el sentido de emitir un nuevo Dictamen y una nueva resolución en los que se consideren los Lineamientos antes referidos, y en virtud de que no se advierte que la sentencia de mérito disponga cuestiones diversas a las ya citadas, es que el Dictamen Consolidado y Resolución antes identificados, serán únicamente modificados respecto a las conclusiones ya citadas, dejando intocado el resto de su contenido, por lo que con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c), d), y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son definitivas e inatacables, se presenta el proyecto de mérito.

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a),n) y s) de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) y aa); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los informes de Campaña de los ingresos y gastos de los Candidatos a los cargos de Gobernador, Diputado Local y Ayuntamiento correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Yucatán.

2. Que conforme a los artículos 5 y 6 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso del recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica **SX-RAP-74/2018**.

3. Que por lo anterior y en razón de lo establecido en los Considerandos **CUARTO** y **QUINTO** de la sentencia de mérito, relativo al estudio de fondo y efectos de la sentencia recaída al expediente citado, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó lo que a continuación se transcribe en su parte conducente:

“(…)

CUARTO. Estudio de fondo

(…)

Conclusión 1_C10_P1

No.	Conclusión	Sanción
1_C10_P1	El sujeto obligado omitió realizar 6 registros contables de los gastos por el uso o goce temporal de los inmuebles utilizados como casas de campaña valuados en \$109,510.56.	Reducción del 25% de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$164,265.84.

El actor alega que la conclusión es contraria al artículo 143 del Reglamento de Fiscalización porque no fue valorada su respuesta que se encuentra capturada y registrada en la siguiente póliza:

Periodo	Póliza	Fecha de operación	Descripción
3	1-Diario	27/06/2018	Casa de campaña de Miguel Ángel May Vera Municipio de Yobaín.

Además, indica que la observación no tiene fundamento, ya que en la póliza PC1/DR-1/16-05-18 de la contabilidad 41602 se encuentra reflejado el gasto por aportación de simpatizante de casa de campaña correspondiente al municipio de Opichén. En ese sentido, afirma que estos gastos fueron reportados en tiempo y forma ante la UTF junto con los documentos que señala.

*El agravio es **parcialmente fundado**, según se explica a continuación.*

En el oficio de errores y omisiones identificado con la clave INE/UTF/DA/26922/18 la UTF señaló en el punto 17 que el sujeto obligado reportó casa de campaña; sin embargo, no registró el gasto en contabilidad, según lo detallado en el ANEXO_6_OBS_17.

Al respecto, en la respuesta de dieciséis de mayo del presente año, el PAN afirmó que reportó en cada uno de los candidatos, la información solicitada por la autoridad.

A partir de lo anterior, la UTF concluyó que la observación fue atendida respecto de los candidatos referenciados con (1) en la columna “Referencia a Dictamen” del Anexo_8_P1; y no atendida respecto de los registros referenciados con (2) y (3).

Del Anexo_8_P1 se observa que la conclusión no se tuvo por atendida tocante a los siguientes candidatos:

CONS.	ENTIDAD FEDERATIVA	ID CONTABILIDAD	CARGO	SUJETO OBLIGADO	NOMBRE CANDIDATO	REFERENCIA SEGUN DICTAMEN
12	YUCATÁN	41643	PRESIDENTE MUNICIPAL	PARTIDO ACCION NACIONAL	SELENE MAGALY PUC UJUL	2
19	YUCATÁN	41602	PRESIDENTE MUNICIPAL	PARTIDO ACCION NACIONAL	RICARDO ORDÓÑEZ CHAN	2
21	YUCATÁN	41653	PRESIDENTE MUNICIPAL	PARTIDO ACCION NACIONAL	RAUL ARCADIO TORRES FAISAL	2
23	YUCATÁN	41605	PRESIDENTE MUNICIPAL	PARTIDO ACCION NACIONAL	RAMON ALFREDO DIAZ ALAMILLA	3
26	YUCATÁN	41608	PRESIDENTE MUNICIPAL	PARTIDO ACCION NACIONAL	NUBIA INDALECIA PECH BACELIS	2
27	YUCATÁN	41630	PRESIDENTE MUNICIPAL	PARTIDO ACCION NACIONAL	INDIA MARGARITA COLLI DOMINGUEZ	2

Por el contrario, el agravio relativo a que no se valoró la póliza PC1/DR-1/16-05-18 de la contabilidad 41602 resulta fundado.

En efecto, de la revisión de las pólizas capturadas en el Sistema Integral de Fiscalización, y las pruebas aportadas por el partido actor en la carpeta identificada como C_10, se advierte que el día dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, el PAN registró la operación siguiente:

NOMBRE DEL CANDIDATO: RICARDO ORDÓÑEZ CHAN
 ASIENTO LOCAL
 SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACIONAL
 CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL
 ENTIDAD: YUCATÁN
 RFE: 000810419301A
 CURP: 000810419301A
 CONTABILIDAD: 41602

PERIODO DE OPERACIÓN: 1
 NÚMERO DE PÓLIZA: 1
 TIPO DE PÓLIZA: COMPROBACIÓN
 NÚMERO DE OFICIO DE EMISIÓN Y OBSERVACIÓN: 26552/18
 SUBTIPO DE PÓLIZA: DIARIO

FECHA Y HORA DE REGISTRO: 16/05/2018 15:27 hrs.
 FECHA DE OPERACIÓN: 30/05/2018
 EMPRESA REG. REGISTRO: CARTILLA UNA A UNA
 FECHA DE OFICIO: 11/05/2018
 TOTALCARGO: \$ 1,000.00
 TOTALABONO: \$ 1,000.00

DESCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA	NÚM. DE CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	CARGO	ABONO	NÚMERO DE OBSERVACIÓN
REGISTRO DE APORTACIÓN DE CASA DE CAMPAÑA	5502100003	CASA DE CAMPAÑA POR APORTACIÓN DIRECTA	REGISTRO DE APORTACIÓN DE CASA DE CAMPAÑA	\$ 1,000.00	\$ 0.00	07
IDENTIFICADOR: 1			DIRECCIÓN: 14 SIN	ORIGEN DE LA CASA: APORTACIÓN		
4000000000	AFORTACIÓN DE CAMPAÑA POR APORTACIÓN DIRECTA	REGISTRO DE APORTACIÓN DE CASA DE CAMPAÑA	\$ 0.00	\$ 1,000.00	07	
IDENTIFICADOR: 1034			RFE: 000810419301A - WILBERT CHAN ARREDONDO			
RELACIÓN DE EVIDENCIA ADJUNTA	NOMBRE DEL ARCHIVO	CLASIFICACIÓN	FECHA ALTA	FECHA EN QUE SE DEJÓ SIN EFECTO	ESTATUS	
CONTRATO CASA CAMPAÑA OPCHEN.pdf	CONTRATOS		16-05-2018 15:27:50		Activo	
CASA CAMPAÑA OPCHEN.pdf	COTIZACIONES		16-05-2018 15:27:50		Activo	

25/07/2018 21:38 Página 1 de 1 USUARIO: eduardo.vello.est1

En ese sentido, toda vez que el consecutivo 19 de Anexo_8_P1 se observa que tuvo por no reportado el gasto de la casa de campaña correspondiente al candidato a la presidencia municipal de Opichén, Ricardo Ordoñez Chan, y la póliza revela que sí fue reportado, esta Sala Regional concluye que la misma no fue valorada, lo que se traduce en una falta de exhaustividad por parte de la responsable.

*De ahí que el agravio sea **fundado y suficiente** para revocar la infracción, y en consecuencia, la sanción impuesta al partido actor para los efectos que se precisarán en el apartado correspondiente.*

Conclusión 1_C16_P1

No.	Conclusión	Sanción
1_C16_P1	<i>El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de producción 1 spots publicitarios de radio y por un monto de \$46,005.60.</i>	<i>Reducción del 25% de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$46,005.60.</i>

(...)

Ahora bien, de la revisión del Anexo_15_P1, esta Sala Regional advierte que los spots a que se refiere la autoridad responsable no son de radio, sino de televisión. Asimismo, de la revisión del contrato presentado en la contabilidad 41601 del candidato Renán Barrera, se observa que el mismo cubre la realización de diversos productos audiovisuales (spots, animaciones, video biografías, cápsulas, etc.), un documental, grabación, seguimiento, entrega de versiones TV y redes sociales, así como la entrega de versiones para radio, entre otros productos.

Dicho contrato se encuentra respaldado por el folio del aviso de contratación CAC16585 por un monto de \$211,120.00 presentado el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, y por la póliza 42 correspondiente a la provisión de la factura 05CD del proveedor Luis Castillo Munguía por el servicio del video, la cual se complementa con la 54 que contiene el egreso por transferencia al proveedor citado.

De todo lo anterior, esta Sala Regional concluye que, tal y como lo indica el partido actor, la autoridad responsable incurre en una falta de fundamentación y motivación de la infracción actualizada, pues no hay una correspondencia entre los spots publicitarios que fueron observados en el oficio de errores y

omisiones, con lo que finalmente se estimaron como no reportados. Además, la UTF no detalla las razones por las cuales el contrato y las evidencias presentadas por el PAN no son suficientes para acreditar que reportó el gasto por concepto de producción de 1 spot publicitario.

*Lo anterior, de conformidad con la tesis de jurisprudencia I.3º.C.J/47 de rubro: **“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOS”.***

De ahí que el agravio hecho valer resulte fundado y suficiente para revocar la infracción y, en consecuencia, la sanción impuesta en los términos que se precisarán en el apartado de efectos correspondiente

“QUINTO. Efectos

*Al haber resultado **parcialmente fundado** el agravio relativo a la conclusión 1_C10_P1, lo procedente es **revocar**, en lo que fue materia de impugnación, la Resolución controvertida para el efecto que la autoridad responsable tenga como reportado el registro contable del inmueble utilizado como [casa de] campaña correspondiente al candidato Ricardo Ordoñez Chan y, en consecuencia, reindividualice la sanción impuesta.*

Asimismo, por lo que hace a la conclusión 1_C16_P1, al advertir que carece de fundamentación y motivación, revoca lisa y llanamente.

En consecuencia, se ordena al Consejo General del INE que emita una diversa resolución, tomando en cuenta lo expuesto en la parte considerativa de esta ejecutoria.

(...)”

Lo anterior, a efecto de que esta autoridad emita una nueva resolución tomando en consideración lo resuelto en dicha ejecutoria; y se revoquen las conclusiones referidas anteriormente, en los términos precisados por la sentencia de mérito.

4. En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace a las conclusiones **C_10_P1 y C_16_P1** del Considerando **34.1**, respecto de la revisión de los informes de Campaña de los ingresos y gastos de los Candidatos a los cargos de Gobernador, Diputado Local y Ayuntamiento correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Yucatán, esta

autoridad electoral procedió a retomar el análisis realizado por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues se argumentó que esta autoridad, en el Dictamen y Resolución impugnados, debió tomar en cuenta el registro contable del inmueble utilizado como casa de campaña correspondiente al candidato Ricardo Ordoñez Chan; asimismo, por cuanto hace a lo establecido en la conclusión C_16_P1 del sujeto obligado en comento, la autoridad no fundamentó ni motivó la misma, por lo que se determinó dejar sin efectos la conclusión referida.

En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, realizando las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la sentencia:

Sentencia	Conclusión	Efectos	Acatamiento
Revocar el Dictamen y Resolución impugnados en la parte correspondiente a la conclusión C_10_P1 , relacionada con el considerando 34.1 , del Partido Acción Nacional , en el estado de Yucatán relativa a una falta de carácter sustancial, con la finalidad de tomar en cuenta el registro contable del inmueble utilizado como casa de campaña correspondiente al candidato Ricardo Ordoñez Chan y, en consecuencia, reindividualice la sanción impuesta.	C_10_P1	Emitir un nuevo Dictamen y Resolución a efecto de que la autoridad responsable tenga como reportado el registro contable del inmueble utilizado como casa de campaña correspondiente al candidato Ricardo Ordoñez Chan y, en consecuencia, reindividualice la sanción impuesta.	Se modifica la parte conducente el Dictamen y Resolución INE/CG1661/2018 y INE/CG11162/2018, respecto de la conclusión C_10_P1 , en los términos precisados en los Considerandos 6, 7 y 8 del presente Acuerdo.
Revocar el Dictamen y Resolución impugnados en la parte correspondiente a la conclusión C_16_P1 , relacionada con el considerando 34.1 , del Partido Acción Nacional , en el estado de Yucatán relativa a una falta de carácter sustancial, dejándola sin efectos.	C_16_P1	Dejar sin efectos.	Se deja sin efectos la sanción correspondiente.

5. En consecuencia, derivado del análisis realizado por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Dictamen y Resolución identificados con las claves **INE/CG1161/2018** e **INE/CG1662/2018**, tocante a la necesidad de tomar en consideración los Lineamientos emitidos por la autoridad jurisdiccional conclusiones **C_10_P1** y **C_16_P1** correspondientes al considerando

34.1 del Partido Acción Nacional; por lo que en cumplimiento de lo anterior, esta autoridad procede a dictar el presente Acuerdo.

6. Que esta autoridad administrativa debe considerar que el partido político sujeto a sanción cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con las sanciones que se les impongan.

En este sentido, en sesión pública extraordinaria de fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Yucatán emitió el Acuerdo C.G.-002/2018 emitido por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Yucatán, por el que aprobó las cifras del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y actividades específicas de los partidos políticos para el ejercicio dos mil dieciocho, asignándole al sujeto obligado que nos ocupa el monto siguiente:

Partido Político	Financiamiento público actividades ordinarias 2018
Partido Acción Nacional	\$23,618,286.43

En este tenor, es oportuno mencionar que el partido político en comento está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho de que para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de la comisión de las infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido esta autoridad electoral, cuenta con información proporcionada a través de un correo electrónico de fecha cinco de septiembre de dos mil dieciocho, emitido por el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Yucatán, mediante el cual informa que el Partido Acción Nacional no tiene saldos pendientes por cubrir al mes de agosto de dos mil dieciocho.

De lo anterior se advierte que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político referido, pues aun cuando tuvieran la obligación de pagar sanciones, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, estarán en posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que se establece en el presente Acuerdo.

7. Que la Sala Regional Xalapa, al haber dejado intocadas las demás conclusiones contenidas en el Dictamen Consolidado **INE/CG1161/2018** y, por tanto, las consideraciones que sustentan la Resolución **INE/CG1162/2018**, este Consejo General únicamente se abocará a la modificación de la parte conducente del Dictamen Consolidado relativo a las conclusiones **C_10_P1 y C_16_P1**, del Considerando **34.1.** relativo al **Partido Acción Nacional** por lo que hace a los incisos **d) y f)**, concernientes a las conclusiones referidas; así como la parte conducente de su respectivo apartado denominado **Imposición de la Sanción**, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos valer en el considerando precedente, en cumplimiento a lo determinado por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ejecutoria materia del presente Acuerdo, en los términos siguientes:

Modificación del Dictamen Consolidado

“(…)

Primer periodo

Gubernatura | Diputación local | Ayuntamiento

Partido Acción Nacional

ID	Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/26922/18	Escrito de respuesta sin número de fecha 11 de mayo de 2018	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incump lió
17	<p><i>El sujeto obligado reporta casa de campaña, sin embargo, no registra el gasto en contabilidad. Lo anterior se detalla en el ANEXO_6_OBS_17 Anexo_8_P1 del presente Dictamen.</i></p> <p><i>Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:</i></p> <p><i>En caso de haber realizado algún gasto:</i></p> <p><i>-El o los comprobantes y archivos XML que amparen los gastos efectuados con todos los requisitos establecidos en la normativa.</i></p>	<p>“EL SUJETO OBLIGADO REPORTE EN CADA UNO DE LOS CANDIDATOS LA INFORMACION SOLICITADA POR LA AUTORIDAD SEGÚN REQUIERE.”</p>	<p>Atendida</p> <p>De la revisión al SIF de la información presentada y de la respuesta del sujeto obligado, se observó que registró gastos asociados con la casa de campaña, lo cual se encuentra referenciado en el anexo Anexo_8_P1 del presente Dictamen con (1), razón por la cual la observación quedó atendida.</p> <p>En acatamiento a la sentencia SX –RAP-74-2018 emitida por el Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la</p>	<p>1_C10_P1</p> <p>El sujeto obligado omitió realizar 5 registros contables de los gastos por el uso o goce temporal de los inmuebles utilizados como casas de campaña valuados en \$91,258.80</p>	<p>El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de los gastos por el uso o goce temporal de los inmuebles utilizados como casas de campaña</p>	<p>Artículo 143 ter del RF</p>

ID	Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/26922/18	Escrito de respuesta sin número de fecha 11 de mayo de 2018	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incump lió										
	<p>-Las evidencias del pago y en caso de que éstos hubiesen excedido el tope de 90 UMA, las copias de los cheques correspondientes con la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”.</p> <p>-El o los contratos de arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de servicios, debidamente requisitados y firmados.</p> <p>-El o los avisos de contratación respectivos.</p> <p>En caso de corresponder a una aportación en especie;</p> <p>-El o los recibos de aportación con los requisitos establecidos en la normativa.</p> <p>-El o los contratos de donación, debidamente requisitados y firmados.</p> <p>-El control de folios que establece el RF.</p> <p>-Dos cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por cada aportación realizada.</p> <p>-Evidencia de la credencial para votar de los aportantes.</p> <p>En todos los casos:</p> <p>-El registro del ingreso y gasto en su contabilidad.</p> <p>-El o los informes de campaña con las correcciones.</p> <p>-Las aclaraciones que a su derecho convengan.</p> <p>Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i), 54, numeral 1, 55, numeral 1, 56, numerales 3, 4 y 5, 61, numeral 1, inciso f), fracción III, 63, 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la LGPP; 26, numeral 1, inciso a), 33, numeral 1, inciso i), 37, 38, 46, numeral, 1, 47, numeral 1, inciso a), 74, 96, numeral 1, 105, 106, 107, numerales 1 y 3, 126, 127, 143 ter, 237, 243 y 245, del RF.</p>		<p>Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral, la casa de campaña del entonces candidato Ricardo Ordoñez Chan se dio por atendida.</p> <p>No atendida</p> <p>Sin embargo, de lo que se encuentra referenciado en el mismo anexo con (2) no registraron gastos asociados por concepto de inmueble como casa de campaña, razón por la cual la observación no quedó atendida.</p> <p>No atendida</p> <p>Sin embargo, de lo que se encuentra referenciado en el mismo anexo con (3) no registraron gastos asociados por concepto de inmueble ni casa de campaña, razón por la cual la observación no quedó atendida.</p> <p>Debido a lo anterior, se constató que omitió reportar 5 inmuebles como casa de campaña.</p> <p>Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado en beneficio de sus candidatos, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF descrito en el apartado correspondiente del presente Dictamen.</p> <p>Identificación del costo para valuación en la Matriz de Precios (Pesos)</p> <table><tr><th>Id matriz de precios</th><th>Proveedor</th><th>Concepto</th><th>Unidad de medida</th><th>Importe con IVA</th></tr><tr><td></td><td>Lizbeth Reyes Peña</td><td>Arrendamiento</td><td>Servicio</td><td>\$6,083.92</td></tr></table> <p>Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen Consolidado la matriz de precios correspondiente a la entidad.</p> <p>La determinación del costo se presenta en el anexo II-A.</p> <p>Nota 2: La determinación de costo por concepto de casa de campaña, corresponde a un mes de renta; en razón de lo anterior y para efectos del cálculo se considerarán 3 periodos, los cuales comprenden las fases del</p>	Id matriz de precios	Proveedor	Concepto	Unidad de medida	Importe con IVA		Lizbeth Reyes Peña	Arrendamiento	Servicio	\$6,083.92			
Id matriz de precios	Proveedor	Concepto	Unidad de medida	Importe con IVA												
	Lizbeth Reyes Peña	Arrendamiento	Servicio	\$6,083.92												

ID	Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/26922/18	Escrito de respuesta sin número de fecha 11 de mayo de 2018	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incump lió																														
			<p>periodo de campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Yucatán.</p> <p>Nota 3: En acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa, en el recurso de apelación SX-RAP-74/2018, se resta el monto de \$18,251.76, correspondiente al C. Ricardo Ordoñez Chan, otrora candidato a presidente municipal de Opichén, en el estado de Yucatán.</p> <p>De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar 5 inmuebles como casa de campaña valuados en \$91,258.80</p> <p>De conformidad con los artículos 243, numeral 2 de la LGIPE y 192 del RF, el costo determinado se acumulará a los gastos de campaña.</p>																																	
34	<p>Monitoreo de spots en radio y televisión</p> <p>Derivado del monitoreo se observó que el sujeto obligado realizó gastos de spots publicitarios, cuyo costo de producción omitió reportar en los informes. Como se detalla en el siguiente cuadro siguiente:</p> <table><tr><th>C o n s .</th><th>I d S l F</th><th>Cand idato bene fici do</th><th>Versió n</th><th>F o li o</th><th>For m at o</th><th>A n e x o</th></tr><tr><td>1</td><td>4 1 6 0 1</td><td>Barre ra Conc ha Rená n Alber to</td><td>Sigam os soñan do Renán Mérida</td><td>R V 0 0 4 - 0 0 - 1 8</td><td>R V 0 0 0 - 18 .m p4</td><td>1 9</td></tr><tr><td>2</td><td>4 1 6 0 1</td><td>Barre ra Conc ha Rená n Alber to</td><td>Renán Barrer a Mérida v2 tv</td><td>R V 0 1 2 0 9 - 1 7</td><td>R V 0 12 09 - 18 .m p4</td><td>2 0</td></tr></table> <p>Se solicita presentar en el SIF lo siguiente:</p>	C o n s .	I d S l F	Cand idato bene fici do	Versió n	F o li o	For m at o	A n e x o	1	4 1 6 0 1	Barre ra Conc ha Rená n Alber to	Sigam os soñan do Renán Mérida	R V 0 0 4 - 0 0 - 1 8	R V 0 0 0 - 18 .m p4	1 9	2	4 1 6 0 1	Barre ra Conc ha Rená n Alber to	Renán Barrer a Mérida v2 tv	R V 0 1 2 0 9 - 1 7	R V 0 12 09 - 18 .m p4	2 0	<p>"EL SUJETO ANEXA EL CONTRATO CON EL PROVEEDOR DONDE SE INDICA EL CONVENIO PARA EL SERVICIO Y LA REALIZACION DE CADA UNA DE LAS EVIDENCIAS ANTES MENCIONADAS".</p>	<p>No atendida</p> <p>Del análisis a la respuesta del sujeto obligado y los registros realizados en la etapa de corrección, se constató que omitió reportar 2 spots de radio, como se detallan en el cuadro. Los spots en comento se detallan en el Anexo_15_P1 del presente Dictamen.</p> <p>Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado en beneficio de sus candidatos, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF descrito en el apartado correspondiente del presente Dictamen.</p> <p>Identificación del costo para valuación en la Matriz de Precios (Pesos)</p> <table><tr><th>Id matriz de precios</th><th>Proveedor</th><th>Conce pto</th><th>Unidad de medida</th><th>Importe con IVA</th></tr><tr><td>20187</td><td>FANTASMA S FILMS S.A. DE C.V.</td><td>Spot Radio</td><td>Servicio</td><td>\$23,002.80</td></tr></table> <p>Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen Consolidado la matriz de precios correspondiente a la entidad.</p>	Id matriz de precios	Proveedor	Conce pto	Unidad de medida	Importe con IVA	20187	FANTASMA S FILMS S.A. DE C.V.	Spot Radio	Servicio	\$23,002.80	<p>1_C16_P1</p> <p>Sin efecto</p> <p>En acatamiento a la sentencia SX –RAP-74-2018 emitida por el Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral, dicha observación queda revocada.</p>	
C o n s .	I d S l F	Cand idato bene fici do	Versió n	F o li o	For m at o	A n e x o																														
1	4 1 6 0 1	Barre ra Conc ha Rená n Alber to	Sigam os soñan do Renán Mérida	R V 0 0 4 - 0 0 - 1 8	R V 0 0 0 - 18 .m p4	1 9																														
2	4 1 6 0 1	Barre ra Conc ha Rená n Alber to	Renán Barrer a Mérida v2 tv	R V 0 1 2 0 9 - 1 7	R V 0 12 09 - 18 .m p4	2 0																														
Id matriz de precios	Proveedor	Conce pto	Unidad de medida	Importe con IVA																																
20187	FANTASMA S FILMS S.A. DE C.V.	Spot Radio	Servicio	\$23,002.80																																

ID	Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/26922/18	Escrito de respuesta sin número de fecha 11 de mayo de 2018	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incump lió												
	<p>En caso de que los gastos hayan sido realizados por el sujeto obligado;</p> <p>- El o los comprobantes que amparen los gastos efectuados con todos los requisitos establecidos en la normativa.</p> <p>- Las evidencias del pago en caso de que éstos hubiesen excedido lo equivalente a 90 UMA, las copias de los cheques correspondientes con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario" o de las transferencias bancarias.</p> <p>- El o los contratos de arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de servicios, debidamente requisitados y firmados.</p> <p>- El o los avisos de contratación respectivos.</p> <p>En caso de que correspondan a aportaciones en especie;</p> <p>- El o los recibos de aportación con la totalidad de requisitos establecidos en la normativa.</p> <p>- El o los contratos de donación o comodato, debidamente requisitados y firmados.</p> <p>- El control de folios que establece el RF, en donde se identifiquen los recibos utilizados, cancelados y pendientes de utilizar.</p> <p>- Dos cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por cada aportación realizada.</p> <p>- Evidencia de la credencial para votar de los aportantes.</p> <p>En caso de una transferencia en especie:</p> <p>- Los contratos de donación o comodato, debidamente requisitados y firmados.</p> <p>- Factura o cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por el inmueble otorgado en comodato.</p>		<p>La determinación del costo se presenta en el anexo II-A.</p> <p>De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar 2 spots de radio valuados en \$46,005.60</p> <p>Asimismo, de las evidencias del monitoreo se constató que dichos espectaculares beneficiaron a los candidatos siguientes:</p> <table><tr><th>Nombre</th><th>ID de conta</th><th>Rubro</th><th>Beneficio de conformidad al prorrateo</th></tr><tr><td>Renan Alberto Barrera Concha</td><td>41601</td><td>Spots radio</td><td>46,005.60</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td></td><td></td><td>46,005.60</td></tr></table> <p>De conformidad con los artículos 243, numeral 2 de la LGIPE y 192 del RF, el costo determinado se acumulará a los gastos de campaña.</p>	Nombre	ID de conta	Rubro	Beneficio de conformidad al prorrateo	Renan Alberto Barrera Concha	41601	Spots radio	46,005.60	TOTAL			46,005.60			
Nombre	ID de conta	Rubro	Beneficio de conformidad al prorrateo															
Renan Alberto Barrera Concha	41601	Spots radio	46,005.60															
TOTAL			46,005.60															

ID	Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/26922/18	Escrito de respuesta sin número de fecha 11 de mayo de 2018	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incump lió
	<p>- El recibo interno correspondiente.</p> <p>En todos los casos;</p> <p>- El registro del ingreso y gasto en su contabilidad.</p> <p>- El informe de campaña con las correcciones.</p> <p>- Muestras de las distintas versiones de los promocionales de radio y televisión.</p> <p>- Las aclaraciones que a su derecho convengan.</p> <p>Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP y 127 del RF.</p>					

Modificación de la Resolución

“(…)

34.1 PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

(…)

d) 6 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones **C5-P1, C9-P1, C10-P1, C18-P1, C45-P3 y C52-P3.**

(…)

d) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras del artículo 143 Ter del Reglamento de Fiscalización. **Conclusiones, C5-P1, C9-P1, C10-P1, C18-P1, C45-P3 y C52-P3**

A continuación, se presentan las conclusiones finales sancionatorias determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado.

No.	Conclusión	Monto involucrado
C5-P1	<i>El sujeto obligado omitió realizar 4 registros contables de los gastos por el uso o goce temporal de los inmuebles utilizados como casas de campaña valuados en \$48,671.36.</i>	\$48,671.36
C9-P1	<i>El sujeto obligado omitió realizar 58 registros contables de los gastos por el uso o goce temporal de los inmuebles utilizados como casas de campaña valuados en \$784,825.68.</i>	\$784,825.68
C10-P1	<i>El sujeto obligado omitió realizar 5 registros contables de los gastos por el uso o goce temporal de los inmuebles utilizados como casas de campaña valuados en \$91,258.80</i>	\$91,258.80
C18-P1	<i>El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de los gastos por el uso o goce temporal de los inmuebles utilizados como casas de campaña valuados en \$ 18,251.76.</i>	\$18,251.76.
C45-P3	<i>El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de los gastos por el uso o goce temporal de 4 inmuebles utilizados como casas de campaña valuados en \$ 24,335.68.</i>	\$24,335.68.
C52-P3	<i>El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de los gastos por el uso o goce temporal de los inmuebles utilizados como casas de campaña valuados en \$267,692.48.</i>	\$267,692.48

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en la observación de mérito, se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, a partir del momento de la notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara las irregularidades detectadas.

(...)

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

En relación con las irregularidades identificadas en las conclusiones analizadas del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar los egresos correspondientes a la adquisición del uso o goce temporal de aquellos bienes inmuebles utilizados como casas de campaña y realizados durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

En el caso a estudio, las faltas corresponden a **omisiones** del sujeto obligado consistentes en omitir reportar gastos realizados en virtud de la utilización de inmuebles como casas de campaña, durante la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 143 Ter del Reglamento de Fiscalización.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

Modo: El sujeto obligado omitió reportar en el Informe de Campaña el egreso relativo a la **adquisición del uso o goce temporal de los bienes inmuebles utilizadas como casa de campaña**. De ahí que el partido contravino lo dispuesto en el artículo 143 Ter del Reglamento de Fiscalización.

Descripción de las Irregularidades observadas
<i>C5-P1. El sujeto obligado omitió realizar 4 registros contables de los gastos por el uso o goce temporal de los inmuebles utilizados como casas de campaña valuados en \$48,671.36.</i>
<i>C9-P1. El sujeto obligado omitió realizar 58 registros contables de los gastos por el uso o goce temporal de los inmuebles utilizados como casas de campaña valuados en \$784,825.68.</i>

Descripción de las Irregularidades observadas
<i>C10-P1. El sujeto obligado omitió realizar 5 registros contables de los gastos por el uso o goce temporal de los inmuebles utilizados como casas de campaña valuados en \$91,258.80</i>
<i>C18-P1. El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de los gastos por el uso o goce temporal de los inmuebles utilizados como casas de campaña valuados en \$ 18,251.76.</i>
<i>C45-P3. El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de los gastos por el uso o goce temporal de 4 inmuebles utilizados como casas de campaña valuados en \$ 24,335.68.</i>
<i>C52-P3. El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de los gastos por el uso o goce temporal de los inmuebles utilizados como casas de campaña valuados en \$267,692.48.</i>

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al sujeto obligado surgieron de la revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Egresos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018

Lugar: Las irregularidades se actualizaron en el estado de Yucatán.

(...)

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que las infracciones deben calificarse como **GRAVES ORDINARIAS**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

(...)

Conclusión C10-P1

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar los egresos realizados a fin de adquirir el uso o goce temporal de los bienes inmuebles utilizados como casas de campaña.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos aludidos realizados durante la campaña en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$91,258.00** (noventa y un mil doscientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.).
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en

el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a) fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica equivalente al **150% (ciento cincuenta por ciento)** sobre el monto involucrado que asciende a la cantidad de **\$136,887.00 (ciento treinta y seis mil ochocientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.)**

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Acción Nacional, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$136,887.00 (ciento treinta y seis mil ochocientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.)**

(...)

¹ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

f) 10 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones C15-P1, C16-P1, C17-P1, C36-P2, C37-P2, C69-P3, C70-P3, C71-P3, C72-P3 y C73-P3.

(...)

C16-P1

Por cuanto hace a la conclusión **C16-P1**, la autoridad jurisdiccional estableció que la autoridad administrativa electoral incurrió en una falta de fundamentación y motivación de la infracción señalada, toda que no existía correspondencia entre los spots observados con aquellos que fueron sancionados por el no reporte de los mismos, Además de que omitió señalar la razón por la cual la documentación presentada por el sujeto incoado no fue suficiente para acreditar o no el reporte del gasto de producción del spot.

En razón de lo anterior, por lo que respecta a la conclusión **C16-P1**, la sala Regional Xalapa determinó revocar lisa y llanamente la conclusión en comento, razón por la cual queda **sin efectos la sanción impuesta en la resolución primigenia.**

8. Que a continuación se detalla la sanción originalmente impuesta al Partido Acción Nacional en la Resolución INE/CG1162/2018, en su Resolutivo **PRIMERO**, así como las modificaciones procedentes de acuerdo a lo razonado en el presente Acuerdo:

Resolución INE/CG1162/2018			Acuerdo por el que se da cumplimiento		
Conclusión	Monto Involucrado	Sanción	Conclusión	Monto Involucrado	Sanción
C_10_P1	\$109,510.56	Reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto	C_10_P1	\$91,258.80	Reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto

Resolución INE/CG1162/2018			Acuerdo por el que se da cumplimiento		
Conclusión	Monto Involucrado	Sanción	Conclusión	Monto Involucrado	Sanción
		Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$164,265.84 (ciento sesenta y cuatro mil doscientos sesenta y cinco pesos 84/100 M.N.)			Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$136,887.00 (ciento treinta y seis mil ochocientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.)
C_16_P1	\$46,005.60	Reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$46,005.60 (cuarenta y seis mil cinco pesos 60/100 MN.N.)	C_16_P1	N/A	Queda sin efecto la sanción.

9. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en los Considerandos **6, 7 y 8** del Acuerdo de mérito, por lo que hace a las conclusiones **C_10_P1, y C16-P1**, se modifica el Punto Resolutivo **PRIMERO** para quedar de la manera siguiente:

(...)

RESUELVE

(...)

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando **34.1** de la presente Resolución, se imponen al **Partido Acción Nacional**, las siguientes sanciones:

(...)

d) 6 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones C5-P1, C9-P1, C10-P1, C18-P1, C45-P3 y C52-P3

(...)

Conclusión C10-P1

Reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$136,887.00 (ciento treinta y seis mil ochocientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.)**

f) 10 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones C15-P1, C16-P1, C17-P1, C36-P2, C37-P2, C69-P3, C70-P3, C71-P3, C72-P3 y C73-P3.

(...)

C16-P1

Sin efectos.

(...)"

En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

A C U E R D A

PRIMERO. Se modifica la parte conducente el Dictamen Consolidado **INE/CG1161/2018** y la Resolución **INE/CG1662/2018**, aprobados en sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, derivado de la revisión de los informes de Campaña de los ingresos y gastos de los Candidatos a

los cargos de Gobernador, Diputado Local y Ayuntamiento correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Yucatán, por lo que hace al Partido Acción Nacional, respecto de las **conclusiones C_10_P1 y C_16_P2**, en los términos precisados en los Considerandos **6, 7, 8 y 9** del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Infórmese a la **Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente SX-RAP-74/2018, remitiéndole para ello copias certificadas de las constancias atinentes.

TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, por su conducto, remita el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Yucatán, y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de notificar al sujeto interesado a la brevedad posible, por lo que se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado.

CUARTO. Hágase del conocimiento del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Yucatán, a efecto de que las multas determinadas en el presente Acuerdo sean pagadas en dicho Organismo Público Local, la cual se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya quedado firme. En términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas en este Acuerdo, serán destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables.

QUINTO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de las sanciones impuestas en el presente Acuerdo.

SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1268/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-336/2018

A N T E C E D E N T E S

I. En sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen Consolidado **INE/CG1161/2018**, así como la Resolución **INE/CG1162/2018**, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado **INE/CG1161/2018** de la revisión de los Informes de ingresos y gastos de los Candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Yucatán.

II. Recursos de Apelación. Inconforme con lo anterior, el quince de agosto de dos mil dieciocho, el Partido Morena, a través de su Representante Propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, interpuso recurso de apelación para controvertir lo determinado en el Dictamen Consolidado **INE/CG1161/2018** y la Resolución **INE/CG1162/2018**.

III. Integración y Turno. Por proveído de fecha diecinueve de agosto de dos mil dieciocho, la Magistrada Presidenta de la Sala Superior ordenó integrar el expediente identificado como SUP-RAP-336/2018 y turnarlo a la ponencia del Magistrado Felipe de la Mata Pizaña.

IV. Radicación. Por proveído de fecha veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, se radicó el expediente de mérito a la ponencia del Magistrado instructor para su sustanciación.

V. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, determinando en su Resolutivo SEGUNDO, lo que se transcribe a continuación:

(...)

SEGUNDO. Se **modifica**, conforme a la parte considerativa correspondiente, la determinación impugnada del estado de Yucatán.

(...)"

Lo anterior, a efecto de que la autoridad responsable emita un nuevo Dictamen Consolidado, así como una nueva Resolución, siguiendo los Lineamientos indicados en la parte considerativa de la sentencia en comento, toda vez que dicho órgano jurisdiccional determinó modificar la conclusión C35-P3 correspondiente al Partido Morena para los siguientes efectos:

"(...)

EFFECTOS

Se **revoca** la conclusión sancionatoria 35, de la resolución controvertida del estado de Yucatán para el efecto de que la autoridad lleve a cabo una nueva individualización de la sanción, en la que considere que la falta es formal, y que haga congruente la calificación de la infracción con la sanción.

(...)"

En otras palabras, **revocó la falta de fondo C35_P3**, para el efecto de calificar la conducta como una falta de forma y re individualizar la sanción.

VI. Derivado de lo anterior, y toda vez que la sentencia recaída al recurso de apelación SUP-RAP-366/2018, tuvo por efecto únicamente revocar el Dictamen Consolidado INE/CG1161/2018 y la Resolución INE/CG1162/2018, en relación a la conclusión **C35-P3** del Partido Morena, en el sentido de emitir un nuevo Dictamen y una nueva resolución en los que se consideren los Lineamientos antes referidos, y en virtud de que no se advierte que la sentencia de mérito disponga cuestiones diversas a las ya citadas, es que el Dictamen Consolidado y Resolución antes identificados, serán únicamente modificados respecto a la conclusión mencionada, dejando intocado el resto de su contenido, por lo que con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c), d), y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación son definitivas e inatacables, se presenta el proyecto de mérito.

C O N S I D E R A N D O

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) y aa); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los Informes de ingresos y gastos de los Candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Yucatán.

2. Que conforme a los artículos 5 y 6 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso del recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica **SUP-RAP-336/2018**.

3. Que por lo anterior y en razón de lo establecido en el estudio de fondo en lo particular en el Tema II del Apartado “FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN” de la sentencia de mérito y los efectos de la sentencia recaída al expediente citado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó lo que se transcribe en su parte conducente a continuación:

“(…)

ESTUDIO DE FONDO

(…)

TEMA II. Omisión de presentar comprobante fiscal digital

a) Resolución impugnada

En la conclusión sancionatoria 35, el INE determinó que MORENA omitió presentar el comprobante fiscal digital (XML), por un importe de \$413,229.00 (cuatrocientos trece mil doscientos veintinueve pesos 00/100 M.N.).

Esto, luego de que el INE requiriera al partido político para que presentara los archivos electrónicos de diversos comprobantes fiscales.

En respuesta al oficio de errores y omisiones, MORENA contestó que: "Con respecto a los archivos electrónicos de los comprobantes fiscales digitales (XML) faltantes mencionada en el cuadro que antecede, se indica que tal información ya se encuentra en el SIF"

Es decir, precisó que los archivos electrónicos ya se encontraban en el SIF, ante lo cual la autoridad señaló que la observación quedó parcialmente atendida, en virtud de que de algunas pólizas que precisó en el Dictamen Consolidado sí localizó los comprobantes digitales.

Sin embargo, respecto de la póliza por un monto de \$413,229.00 (cuatrocientos trece mil doscientos veintinueve pesos 00/100 M.N.), la autoridad señaló que no quedó atendida

La responsable calificó la falta como sustantiva y grave ordinaria; para la imposición de la sanción examinó las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la falta de reincidencia, singularidad de la conducta, así como capacidad económica.

En ese sentido. Así, determinó que la sanción consistiría en el 50% (cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado \$413,229.00 (cuatrocientos trece mil doscientos veintinueve pesos 00/100 M.N.), cantidad que asciende a \$206,614.50 (doscientos seis mil seiscientos catorce pesos 50/100 M.N.).

Para descontar esa cantidad, reduciría las ministraciones en un 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes le corresponde al partido, hasta alcanzar la cantidad de \$206,614.50 (doscientos seis mil seiscientos catorce pesos 50/100 M.N.).

(...)

b) Planteamiento

El partido político señala que la sanción se encuentra indebidamente fundada, porque la falta no representó un beneficio económico sino un error contable, y

que impuso una sanción fija, de la cual desconoce el criterio de cuantificación, por lo que se trata de una conclusión indebidamente fundada y motivada.

Además, indica que por motivos ajenos a su voluntad no pudo subsanar la observación realizada por la autoridad, derivado a errores en el sistema, razón por la que optó por solicitar al SAT la certificación de validez del archivo XML y anexarlo como evidencia al SIF junto con la pantalla de error.

(...)

c) Decisión

Es ineficaz el planteamiento del recurrente en cuanto a que hubo un error en el SIF que le impidió cargar el comprobante electrónico ya que tales alegaciones no las hizo valer en el momento oportuno que era en la contestación al oficio de errores y omisiones.

Por otro lado, es fundado el agravio relativo a que la sanción se encuentra indebidamente fundada y motivada, ya que al tratarse de una omisión no debió calificarse como falta sustantiva sino formal.

(...)

2. Individualización de la sanción

*En otro orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte que es **fundado** el agravio relativo a que la sanción impuesta se encuentra indebidamente fundada y motivada.*

Lo anterior, en razón de que la autoridad responsable determinó que MORENA omitió presentar un comprobante fiscal digital y calificó dicha falta como sustantiva y grave ordinaria.

La autoridad señaló que el partido político incumplió con lo dispuesto en el artículo 127, del Reglamento de Fiscalización que obliga a los sujetos obligados a registrar contablemente los egresos y soportarlos con la documentación original que cumpla con los requisitos fiscales.

Aunque en este caso, MORENA no faltó en registrar sus egresos, tan es así que la Unidad Técnica le requirió presentar los archivos electrónicos de diversos comprobantes fiscales registrados por el partido, es decir, sí reportó el gasto, pero no presentó el comprobante digital.

Entonces, tal como lo ha considerado esta Sala Superior¹, la falta de entrega de documentación requerida, así como los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de los sujetos obligados, por sí mismas, constituyen una mera falta formal.

*Ello es así, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, **sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas**, que da certeza del origen, monto, destino y aplicación de los ingresos y egresos de los referidos sujetos obligados.*

El incumplimiento al deber de presentar toda la documentación requerida obstaculiza esa labor fiscalizadora.

*En ese sentido, lo procedente es **revocar** la conclusión 35, por la omisión de presentar el comprobante fiscal digital (XML), por un importe de \$413,229.00 (cuatrocientos trece mil doscientos veintinueve pesos 00/100 M.N.), para el efecto de que la autoridad lleve a cabo una nueva individualización de la sanción, en la que considere que la falta es formal, y que haga congruente la calificación de la infracción con la sanción.*

(...)

EFFECTOS

*Se **revoca** la conclusión sancionatoria 35, de la resolución controvertida del estado de Yucatán para el efecto de que la autoridad lleve a cabo una nueva individualización de la sanción, en la que considere que la falta es formal, y que haga congruente la calificación de la infracción con la sanción.*

(...)"

Lo anterior, a efecto de que esta autoridad emita una nueva resolución tomando en consideración lo resuelto en dicha ejecutoria; y se revoque la conclusión referida anteriormente, en los términos precisados por la sentencia de mérito.

4. En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace a la conclusión **C35-P3** del Considerando **34.8**, respecto de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de los Candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Yucatán, esta autoridad electoral procedió a retomar el análisis realizado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

¹ Véase SUP-RAP-106/2018, así como SUP-RAP-200/2017.

Judicial de la Federación, al argumentarse que la omisión por parte del recurrente consistió en no presentar el comprobante fiscal digital (XML) respecto de los egresos observados en la conclusión en comento, lo cual no puede ser considerado como una falta de carácter sustancial, toda vez que el partido Morena no omitió el registro de dichos egresos si no que únicamente la omitió presentar un documento comprobatorio de dicha operación.

En esa tesitura, la autoridad jurisdiccional sostiene que la omisión de presentar la documentación requerida, así como los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de los sujetos obligados, por sí mismas, constituyen meras faltas formales, tal y como acontece en la observación motivo de la conclusión en comento.

En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, realizando las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la sentencia:

Sentencia	Conclusión	Efectos	Acatamiento
Revocar el Dictamen y Resolución impugnados en la parte correspondiente a la conclusión C35-P3 , relacionada en el considerando 34.8 , del Partido Morena , relativa a una falta de carácter sustancial, con la finalidad de que la autoridad fiscalizadora lleve a cabo una nueva individualización de la sanción, en la que considere que la falta en comento es de carácter formal.	C35-P3	Emitir un nuevo Dictamen y Resolución a efecto de que la Unidad Técnica de Fiscalización individualice nuevamente la sanción, tomando en consideración que la conclusión en comento es una falta de carácter formal.	Se modifica la parte conducente el Dictamen y Resolución INE/CG1161/2018 y INE/CG1162/2018, respecto de la conclusión C35-P3 , en los términos precisados en los Considerandos 6, 7 y 8 del presente Acuerdo.

5. En consecuencia, derivado del análisis realizado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Dictamen y Resolución identificados con las claves **INE/CG1161/2018** e **INE/CG1162/2018**, tocante a la necesidad de tomar en consideración los Lineamientos emitidos por la autoridad jurisdiccional conclusión **C35-P3** correspondiente al considerando **34.8** del Partido Morena por lo que en cumplimiento de lo anterior, esta autoridad procede a dictar el presente Acuerdo.

6. Que esta autoridad administrativa debe considerar que el partido político sujeto a sanción cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con las sanciones que se les impongan.

En este sentido, en sesión pública extraordinaria de fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán emitió el Acuerdo C.G.-002/2018, por el que aprobó las cifras del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos para el ejercicio dos mil dieciocho, asignándole al sujeto obligado que nos ocupa el monto siguiente:

Partido Político	Monto de financiamiento público para Actividades Ordinarias
Partido Morena	\$5,581,126.62

En este tenor, es oportuno mencionar que partido político en mención está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución Federal y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho de que para valorar la capacidad económica de los partidos políticos infractores es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de la comisión de las infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido esta autoridad electoral, cuenta con información proporcionada a través de un correo electrónico de fecha cinco de septiembre de dos mil dieciocho, emitido por el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, mediante el cual informa que el Partido Morena no tiene saldos pendientes por cubrir al mes de agosto de dos mil dieciocho.

De lo anterior se advierte que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los referidos partidos políticos, pues aun cuando tuvieren la obligación de pagar sanciones, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, estarán en posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que se establece en el presente Acuerdo.

7	41 24 0	More na	Concen tradora	P1N/PD- 80/08/06/ 2018	25,4 16.2 2	(1)	razón la observación quedó no atendida.			
8	41 24 0	More na	Concen tradora	P1N/PD- 120/12/06 /2018	66,9 69.1 2	(1)				
9	41 24 0	More na	Concen tradora	P1N/PD- 122/29/06 /2018	165, 300. 00	(1)				
1	41 24 0	More na	Concen tradora	P1N/PD- 161/20/06 /2018	96,0 00.0 0	(1)				
1	41 24 0	More na	Concen tradora	P1N/PD- 163/20/06 /2018	70,3 00.0 0	(1)				
1	41 24 0	More na	Concen tradora	P1N/PD- 164/20/06 /2018	29,7 00.0 0	(1)				
1	41 24 0	More na	Concen tradora	P1N/PD- 167/20/06 /2018	104, 000. 00	(1)				
1	41 24 0	More na	Concen tradora	P1N/PD- 169/20/06 /2018	413, 229. 00	(2)				
1	41 24 0	More na	Concen tradora	P1N/PD- 171/20/06 /2018	70,3 00.0 0	(1)				
1	41 24 0	More na	Concen tradora	P1N/PD- 174/26/06 /2018	165, 300. 00	(1)				
Total				\$1,594,189.46						
<p>Se solicita presentar en el SIF, lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El comprobante fiscal en formato XML. - Las aclaraciones que a su derecho convengan. <p>Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, numeral 6); 46, numeral 1 y 127, numeral 1, del RF</p>										

(...)"

Modificación de la Resolución

"(...)

34.8 MORENA.

(...)

a) 1 Falta de carácter formal: **Conclusión C35-P3.**

(...)

a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la conclusión sancionatoria de carácter formal infractora del artículo 39, numeral 6 del Reglamento de Fiscalización: **Conclusión C35-P3.**

No.	Conclusión
C35-P3	<i>“El sujeto obligado omitió presentar los comprobantes fiscales digitales XML; sin embargo, anexo a la póliza, se localizó la verificación de comprobantes digitales por internet.”</i>

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción II y III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación, se hicieron del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al partido político en cuestión, para que en un plazo de cinco días presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad detectada; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar la observación realizada.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los candidatos involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña materia de estudio, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6, del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de su candidato la observación que se detalla en el oficio referido en el análisis de la conclusión. Esto, a efecto que el candidato presentara las aclaraciones que considerara procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido, mediante requerimiento al ente político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de la conducta materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de prontitud del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el capítulo III *“DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS”* de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de **Campaña**.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos...”*

De lo anterior se desprende que, no obstante que el sujeto obligado haya incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se trate.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, las respuestas del partido no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendientes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

En este contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el

Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

En este sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.-

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.”

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del partido no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se advierte conducta tendente a deslindarse de la irregularidad observada, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la cual es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por la falta que se presentó en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a)** Tipo de infracción (acción u omisión)
- b)** Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c)** Comisión intencional o culposa de la falta.
- d)** La trascendencia de las normas transgredidas.
- e)** Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f)** La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).

En el cuadro siguiente en la columna identificada como **(1)** se señala la irregularidad cometida por el sujeto obligado, en la columna **(2)** se indica si se trata de una omisión o una acción y en la columna **(3)** la norma vulnerada.²

Descripción de la irregularidad observada (1)	Acción u omisión (2)	Normatividad vulnerada (3)
<i>Conclusión 35_P3. El sujeto obligado omitió presentar los comprobantes fiscales digitales XML, sin embargo anexo a la póliza se localizó la verificación de comprobantes digitales por internet</i>	Omisión	Artículo 39, numeral 6 del RF.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado incurrió en la irregularidad señalada en el cuadro que antecede, identificada con el número **(1)**, contraviniendo con la normatividad señalada en la columna **(3)**.

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Yucatán, concretándose en dicha entidad federativa, y

² Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003.

detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionado con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Es importante señalar que con la actualización de la falta formal no se acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del partido político, sino únicamente su puesta en peligro.

Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del financiamiento de los sujetos obligados³.

En la conclusión **C35-P3** el Sujeto Obligado en comentario, vulneró lo dispuesto en el artículo 39, numeral 6 del Reglamento de Fiscalización.⁴

³ En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: *“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y gastos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen una mera falta formal, **porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos**, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.*

*En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad **por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público**, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”*

⁴ Mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen.

De la valoración del artículo se contemplan disposiciones cuya finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control contable de las operaciones que el sujeto obligado, realice, es decir, los ingresos y egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello, por la autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar a cabo la función de la fiscalización.

La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.

En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus gastos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los gastos con documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de

los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.

En síntesis, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los partidos políticos de realizar bajo un debido control el registro contable de sus gastos, consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.

Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus operaciones de forma clara.

Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia del artículo referido no se vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y gastos de origen público o privado del partido político.

En consecuencia, el incumplimiento de la disposición citada, únicamente constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos, entre ellos el formato XML, de conformidad con el precepto previamente citado.

Esto es, se trata de una conducta, la cual, solamente configura un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes políticos.

Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos, rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

En ese sentido, la conducta infractora observadas en la revisión del Informe de los Ingresos y Gastos de Campaña en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera falta formal, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control en la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por la conducta, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, por lo que la infracción expuesta en el apartado del análisis temático de las

irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, previamente analizadas, no acreditan la vulneración o afectación al aludido bien jurídico protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora imputable al ente político, la cual puso en peligro (abstracto) el bien jurídico tutelado, toda vez que esta autoridad electoral no contó con los elementos necesarios para ejercer un debido control en la fiscalización de dicho ente político.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche, pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

El ente político materia de análisis cometió una irregularidad que se traduce en la existencia de una **FALTA FORMAL**, en la que se viola el mismo valor común, toda vez que existe unidad en el propósito de la conducta en el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.

Como se expuso en el inciso d), se trata de una falta, la cual, solamente configura un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado control de recursos, sin que exista una afectación directa.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **LEVE**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el presente Acuerdo, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente caso se determinen.

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el partido político, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **LEVE**.
- Que, con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos referidos.

- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el reglamento de la materia.
- Que se trató de una irregularidad, es decir, hubo singularidad en la conducta por el partido político.

Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento exclusivo para determinar el monto de la sanción en la falta formal, sino solo uno de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo atenderse a la naturaleza de la falta implicada, por lo que la autoridad al momento de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.

Asimismo, se trata de un elemento discrecional sobre el cual la autoridad determinará su importancia y relevancia para la fijación de la sanción, no obstante, tal facultad no será arbitraria pues debe atender a las circunstancias y elementos que convergen en la comisión de las conductas que se estiman infractoras de la normatividad electoral. Al respecto, cabe mencionar el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP-89/2007, en el cual sostiene que en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable. Para lo cual debe precisarse con claridad el origen del monto involucrado.

En consecuencia, en la falta formal no siempre es posible contar con un monto involucrado, toda vez que las características mismas de la infracción, en ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracción relacionada con la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien, prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.

Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de una falta formal, la determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste

el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto se toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la comisión intencional o culpable de la falta; la trascendencia de las normas transgredidas; la reincidencia, la singularidad, entre otros elementos que en conjunto permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir la conducta infractora.

De este modo, dicha irregularidad trae como resultado el incumplimiento de la obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa electoral.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁵

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, (ahora Unidades de Medidas y Actualización), es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el partido político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

En consecuencia, se concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Morena, es la prevista en dicha fracción II, inciso a) del artículo 456 de la Ley

⁵ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa que asciende a **10 (Diez)** Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a **\$806.00 (Ochocientos seis pesos 00/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

(...)"

8. Que a continuación se detalla la sanción originalmente impuesta al Partido Morena en la Resolución **INE/CG1162/2018**, en su Resolutivo **OCTAVO**, así como las modificaciones procedentes de acuerdo a lo razonado en el presente Acuerdo:

Resolución INE/CG1162/2018			Acuerdo por el que se da cumplimiento		
Conclusión	Monto Involucrado	Sanción	Conclusión	Monto Involucrado	Sanción
C35-P3	N/A	Reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$206,614.50(doscientos seis mil seiscientos catorce pesos 50/100 M.N.)	C35-P3	N/A	Una multa que asciende a 10 (Diez) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a \$806.00 (Ochocientos seis pesos 00/100 M.N.)

9. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en los Considerandos **6, 7 y 8** del Acuerdo de mérito, por lo que hace a la conclusión **C35-P3**, se modifica el Punto Resolutivo **OCTAVO** para quedar de la manera siguiente:

(...)

RESUELVE

(...)

OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando **34.8** de la presente Resolución, se imponen al **Partido Morena**, las sanciones siguientes:

(...)

a) 1 Falta de carácter formal: conclusión **C35-P3**.

(...)

Una **multa** que asciende a **10 (Diez)** Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a **\$806.00 (Ochocientos seis pesos 00/100 M.N.)**.

(...)”

En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

ACUERDA

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado **INE/CG1161/2018** y la Resolución **INE/CG1162/2018**, aprobados en sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, derivado de la revisión de los Informes de ingresos y gastos de los Candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Yucatán, por lo que hace al Partido Morena, respecto de la conclusión **C35-P3**, en los términos precisados en los Considerandos **6, 7 8 y 9** del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Infórmese a la **Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-336/2018, remitiéndole para ello copias certificadas de las constancias atinentes.

TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, por su conducto, remita el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de notificar al sujeto interesado a la brevedad posible; por lo que se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado.

CUARTO. Hágase del conocimiento del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, a efecto de que las multas determinadas en el presente Acuerdo sean pagadas en dicho Organismo Público Local, la cual se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya quedado firme. En términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas en este Acuerdo, serán destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables.

QUINTO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de las sanciones impuestas en el presente Acuerdo.

SEXTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral, el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1269/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-196/2017 Y ACUMULADO

ANTECEDENTES

I. En sesión extraordinaria que inició el catorce de julio de dos mil diecisiete y concluyó el diecisiete de julio siguiente, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución **INE/CG300/2017**, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado **INE/CG299/2017** de la revisión de los informes de Campaña de los ingresos y gastos de los Candidatos a los cargos de Gobernador, Diputado Local y Ayuntamiento correspondientes al Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit.

II. **Recursos de Apelación.** Inconformes con lo anterior, el veintiuno y veinticinco de julio de dos mil diecisiete, los Partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, a través de sus representantes ante el consejo General del Instituto Nacional Electoral, interpusieron sendos recursos de apelación para controvertir lo determinado en el Dictamen Consolidado **INE/CG299/2017** y la Resolución **INE/CG300/2017**.

III. **Turno.** Por proveídos de fechas veintiséis y treinta de julio de dos mil diecisiete, respectivamente, la Magistrada Presidenta de la Sala Superior ordenó turnar los expedientes de mérito a la ponencia del Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera para su sustanciación.

IV. **Escisión.** Mediante acuerdos dictados el nueve de agosto de dos mil diecisiete, el Pleno de la Sala Superior determinó la escisión de los recursos en comento y remitió los autos de dichos medios de impugnación a la Sala Regional correspondiente a efecto de que esta conociera lo relativo a las conclusiones de Ayuntamientos y Diputados Locales, precisando que la Sala Superior conocería de forma exclusiva respecto de las informidades atinentes a la gubernatura de la Entidad federativa.

V. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió los recursos referidos, en sesión pública celebrada el catorce de septiembre de dos mil diecisiete, determinando en sus Resolutivos PRIMERO y SEGUNDO, lo que se transcribe a continuación:

*“PRIMERO. Se **acumula**, el recurso de apelación SUP-RAP-208/2017, al diverso SUP-RAP-196/2017, en consecuencia, deberá agregarse copia certificada de los Puntos Resolutivos de la presente sentencia a los autos del asunto acumulado.*

*SEGUNDO. En lo que es materia de revisión, se **revoca** la resolución recurrida.*

(...)”

Lo anterior, a efecto de que la autoridad responsable emita un nuevo Dictamen Consolidado, así como una nueva Resolución, siguiendo los Lineamientos indicados en la parte considerativa de la sentencia en comento, toda vez que dicho órgano jurisdiccional determinó revocar las conclusiones 20 y 24 correspondientes a la Coalición “Juntos por Ti” para los siguientes efectos:

“1) Precise cuales fueron los productos que buscó en los registros contables para emprender la comparativa con los cuestionados.

2) Especifique las características que tomo en cuenta para identificar los productos cuestionados y los comparados, para derivar que, efectivamente, resultaban similares.

3) Tome en consideración que los videos F-13 y 6 F-PO-COA-PAN-1, son los mismos.

(...)”

VI. Derivado de lo anterior, y toda vez que los recursos de apelación SUP-RAP-196/2017 y su acumulado, tuvieron por efecto únicamente revocar el Dictamen Consolidado INE/CG299/2017 y la Resolución INE/CG300/2017, en relación a las conclusiones **20 y 24** de la Coalición “Juntos por Ti” en el sentido de emitir un nuevo Dictamen y una nueva resolución en los que se consideren los Lineamientos antes referidos, y en virtud de que no se advierte que la sentencia de mérito disponga cuestiones diversas a las ya citadas, es que el Dictamen Consolidado y Resolución antes identificados, serán únicamente modificados respecto a las conclusiones ya citadas, dejando intocado el resto de su contenido, por lo que con fundamento en

los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c), d), y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son definitivas e inatacables, se presenta el proyecto de mérito.

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) y aa); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los informes de Campaña de los ingresos y gastos de los Candidatos a los cargos de Gobernador, Diputado Local y Ayuntamiento correspondientes al Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit.

2. Que conforme a los artículos 5 y 6 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso del recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica **SUP-RAP-196/2017 y su acumulado**.

3. Que por lo anterior y en razón de lo establecido en el Considerando QUINTO de la sentencia de mérito, relativo al estudio de fondo y efectos de la sentencia recaída al expediente citado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó lo que a continuación se transcribe en su parte conducente:

“(…)

QUINTO. Estudio de fondo

(…)

b. Conclusión 20.

(...)

Ahora bien, de lo expuesto con antelación se colige que los agravios expuestos, en relación con el tema en estudio resultan fundados, en razón de lo siguiente:

La autoridad responsable, entre otros fundamentos, se apoyó en el contenido del artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, relativo a la “Determinación del valor de gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados”, el cual es de la literalidad siguiente:

(transcripción del artículo señalado)

De dicho numeral se sigue, en lo que atañe a este apartado, que se deberán identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación y sus componentes deberán ser comparables.

Al efecto, la autoridad fiscalizadora, únicamente hizo referencia al contenido del artículo en cuestión, pues refirió que, para establecer el costo de lo omitido, acudió a los registros contables de los sujetos obligados, en donde, buscó aquellos con características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran ser comparables con los gastos no reportados, en términos de lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización.

Sin embargo, omitió describir de manera concreta:

- Cuáles fueron los productos que buscó en los registros contables para emprender la comparativa con los cuestionados (“banderas” y “playeras”).*
- Qué características tomó en cuenta para identificar los productos cuestionados y los comparados, para derivar que, efectivamente, resultaban similares.*

Lo anterior se hacía necesario, pues no bastaba que la autoridad hiciera una referencia genérica a los pasos establecidos en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, sino que, en observancia al principio constitucional de fundamentación y motivación, debió exponer de manera concreta y detallada qué productos empleó como base de muestreo y que sirvieron como sustento de la comparativa, así como las características coincidentes.

Sin embargo, al no acontecer de esa manera, la autoridad responsable impidió al partido político recurrente conocer de forma clara y precisa cuáles fueron los motivos por virtud de los cuales se le impuso la sanción controvertida.

En ese contexto, la autoridad responsable en acatamiento a esta ejecutoria, al momento de emitir pronunciamiento respecto a los productos en estudio “banderas” y “playeras” debe precisar aquéllos que tomó en cuenta y los puntos de similitud –características-, para que el obligado esté en aptitud de conocer los motivos de la decisión.

(...)

c. Conclusión 24.

(...)

Identidad de contenido en los videos (inciso ii).

Por cuanto al tema se refiere, este tribunal constitucional estima que los agravios son esencialmente fundados, porque, como se aduce por el recurrente, los videos cuestionados son idénticos y ante ello, la autoridad responsable al establecer la sanción, no debió estimar que se trataba de diversos trabajos de producción.

En efecto, la materia de estudio en este apartado se circunscribe en razón de que, a criterio del recurrente, los videos F-13 y 6 F-PO-COA-PAN-1, son el mismo.

En la resolución recurrida, la responsable precisó que el inconforme omitió reportar el gasto erogado con motivo de la producción de cinco videos con edición y producción, cuyo monto total ascendía a \$574,408.30.

Al consultar el anexo 6 al cual remite el inconforme en sus motivos de disenso, se advierte que la autoridad fiscalizadora registró los videos, con los identificativos siguientes:

(...)

Al constatar este tribunal el contenido de los materiales cuestionados por el recurrente [F-13 y 6 F-PO-COA-PAN-1], se advierte que, como se afirma en los agravios, se trata del mismo video, como se evidencia a continuación:

De lo anterior se concluye que, la responsable al conformar el anexo 6, soslayó que dos videos, con los cuales se integró la sanción son iguales y en esa medida, si lo que analizó fue la omisión de reportar gastos por concepto de edición y producción, con independencia de que uno de ellos [F-13] se haya alojado en el servidor del portal “Facebook” y el otro [6 F-PO-COA-PAN-1] en la plataforma denominada “YouTube”, no debió sancionar por dos omisiones de

reportar gastos por producción y edición por tratarse del mismo, máxime que la sanción no fue establecida en función del medio tecnológico en el que se alojó.

Por lo cual, al momento de establecer el monto que corresponde por la omisión de reportar gastos por producción y edición, la responsable debe tomar en cuenta que los indicados videos F-13 y 6 F-PO-COA-PAN-1, son los mismos.

(...)

3. Efectos de la sentencia

Al resultar parcialmente fundados los agravios hechos valer por el Partido del Trabajo, identificados como 1.2, incisos b) y c), punto ii) [conclusiones 20 y 24], lo procedente es revocar el Dictamen y la resolución controvertida, a efecto que el Consejo General, siguiendo los Lineamientos de la presente ejecutoria:

1) Precise cuales fueron los productos que buscó en los registros contables para emprender la comparativa con los cuestionados.

2) Especifique las características que tomo en cuenta para identificar los productos cuestionados y los comparados, para derivar que, efectivamente, resultaban similares.

3) Tome en consideración que los videos F-13 y 6 F-PO-COA-PAN-1, son los mismos.

(...)"

Lo anterior, a efecto de que esta autoridad emita una nueva resolución tomando en consideración lo resuelto en dicha ejecutoria; y se revoquen las conclusiones referidas anteriormente, en los términos precisados por la sentencia de mérito.

4. En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace a las conclusiones **20 y 24** del considerando 31.8, respecto de la revisión de los informes de Campaña de los ingresos y gastos de los Candidatos a los cargos de Gobernador, Diputado Local y Ayuntamiento correspondientes al Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit, esta autoridad electoral procedió a retomar el análisis realizado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues se argumentó que esta autoridad, en el Dictamen y Resolución impugnados, dejó de referir los artículos y características que tomó en consideración para efecto de determinar el costo de aquellos productos materia de observación en la conclusión 20 de la Coalición "Juntos Por Ti"; y omitiendo, por

cuanto hace a lo establecido en la conclusión 24 del sujeto obligado en comento, que los videos publicitarios identificados como F-13 y 6 F-PO-COA-PAN-1 en el Dictamen Consolidado son uno mismo, por lo que no deben ser contabilizados como dos, sino como un solo video.

En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, realizando las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la sentencia:

Sentencia	Conclusiones	Efectos	Acatamiento
Revocar el Dictamen y Resolución impugnados en la parte correspondiente a la conclusión 20 , relacionada en el considerando 31.8 , de la Coalición “Juntos por Tí” , en el estado de Nayarit relativa a una falta de carácter sustancial, con la finalidad de especificar los productos y características que fueron tomados en consideración para emprender la comparativa con aquellos cuestionados.	20	Emitir un nuevo Dictamen y Resolución a efecto de que la Unidad Técnica de Fiscalización especifique los productos y características que fueron tomados en consideración para emprender la comparativa con aquellos cuestionados.	Se modifica la parte conducente el Dictamen y Resolución INE/CG299/2017 y INE/CG300/2017, respecto de las conclusiones 20 , en los términos precisados en los Considerandos 4, 5, 6, 7 y 8 del presente Acuerdo.
Revocar el Dictamen y Resolución impugnados en la parte correspondiente a la conclusión 24 , relacionada en el considerando 31.8 , de la Coalición “Juntos por Tí” , en el estado de Nayarit relativa a una falta de carácter sustancial, con la finalidad de tomar en consideración que los videos F-13 y 6 FPO- COA-PAN-1.	24	Emitir un nuevo Dictamen y Resolución a efecto de que la Unidad Técnica de Fiscalización tome en consideración que los videos F-13 y 6 FPO- COA-PAN-1.	Se modifica la parte conducente el Dictamen y Resolución INE/CG299/2017 y INE/CG300/2017, respecto de las conclusiones 24 , en los términos precisados en los Considerandos 4, 5, 6, 7 y 8 del presente Acuerdo.

5. En consecuencia, derivado del análisis realizado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Dictamen y Resolución identificados con las claves **INE/CG299/2017** e **INE/CG300/2017**, tocante a la necesidad de tomar en consideración los Lineamientos emitidos por la autoridad jurisdiccional conclusiones **20 y 24** correspondientes al Considerando **31.8** de la Coalición “Juntos

por Ti”;¹ por lo que en cumplimiento de lo anterior, esta autoridad procede a dictar el presente Acuerdo.

6. Que esta autoridad administrativa debe considerar que los partidos políticos sujetos a sanción cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con las sanciones que se les impongan.

En este sentido, en sesión pública extraordinaria de fecha doce de enero de dos mil dieciocho, el Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit emitió el Acuerdo IEEN-CLE-001/2018, por el que aprobó las cifras del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y actividades específicas de los partidos políticos para el ejercicio dos mil dieciocho, asignándole al sujeto obligado que nos ocupa el monto siguiente:

Partido Político	Monto de financiamiento público para Actividades Ordinarias
Partido Acción Nacional	\$9,775,316.93
Partido de la Revolución Democrática	\$4,013,710.41
Partido del Trabajo	\$ 3,033,619.26
Partido de la Revolución Socialista	N/A

Cabe señalar que el Partido de la Revolución Socialista no recibió financiamiento público para actividades ordinarias en virtud de no encontrarse dentro del supuesto establecido en el artículo 52 de la Ley General de Partidos, mismo que dispone que para que los partidos políticos cuenten con recursos públicos locales deberán haber obtenido el 3% (tres por ciento) de la votación válida emitida en el Proceso Electoral Local anterior en la entidad federativa que se trate.

Asimismo, y por virtud de lo anterior, dicho ente político se encuentra en la sustanciación del procedimiento de pérdida de registro, toda vez que no alcanzó el porcentaje requerido para conservar el registro en alguna de las elecciones celebradas en el Proceso Electoral Local Ordinario y en el Proceso Electoral Local Extraordinario de la Demarcación Electoral 01 del municipio de San Blas, ambos del 2017 en el estado de Nayarit.

¹ Si bien los recurrentes son los Partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, la reindividualización de la sanción tendrá efectos para todos los partidos integrantes de la coalición “Juntos Por Ti” (PAN,PRD, PT Y PRS), toda vez que de conformidad con el artículo 340 del Reglamento de Fiscalización, deberán ser sancionados de manera individual atendiendo el principio de proporcionalidad, el grado de responsabilidad de cada uno de dichos entes políticos y sus respectivas circunstancias y condiciones, tomando en consideración el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos en términos de la coalición.

En este tenor, es oportuno mencionar que los partidos políticos restantes en comento están legal y fácticamente posibilitados para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución Federal y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho de que para valorar la capacidad económica de los partidos políticos infractores es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de la comisión de las infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido esta autoridad electoral, cuenta con información proporcionada a través de correos electrónicos de fechas veinticuatro y veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, emitidos por la Coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, mediante el cual informa que los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Trabajo tienen saldos pendientes por cubrir al mes de agosto de dos mil dieciocho, los cuales se desglosan de la siguiente manera:

Partido Acción Nacional		
Deducción	Importe total	Saldo a Agosto de 2018
INE/CG806/2016	\$2,921.60	\$0.00
INE/CG147/2017	\$52,790.40	\$0.00
INE/CG172/2017	\$1,639,329.09	\$0.00
INE/CG300/2017	\$7,625,371.48	\$5,654,668.72
INE/CG446/2017	\$436,843.89	\$436,843.89
INE/CG516/2017	\$322,769.28	\$322,769.28
INE/CG18/2018	\$2,340.19	\$2,340.19
Total	\$10,082,365.93	\$6,416,622.08

Partido de la Revolución Democrática		
Deducción	Importe total	Saldo a Agosto de 2018
INE/CG810/2016	\$295,041.31	\$0.00
INE/CG172/2017	\$324,155.12	\$0.00
INE/CG300/2017	\$8,069,887.22	\$7,183,942.24
INE/CG446/2017	\$491,877.88	\$491,877.88
INE/CG520/2017	\$543,016.23	\$543,016.23
INE/CG18/2018	\$2,038.23	\$2,038.23
INE/CG379/2018	\$4,601.52	\$4,601.52
Total	\$9,730,617.51	\$8,225,476.10

Partido del Trabajo		
Deducción	Importe total	Saldo
INE/CG812/2016	\$151,821.60	\$0.00
INE/CG300/2017	\$3,294,949.89	\$2,459,901.89
INE/CG446/2016	\$395,170.11	\$395,170.11
INE/CG522/2017	\$827,459.75	\$827,459.75
Total	\$4,669,401.35	\$3,682,531.75

De lo anterior se advierte que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los referidos partidos políticos, pues aun cuando tuvieren la obligación de pagar sanciones, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, estarán en posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que se establece en el presente Acuerdo.

7. Que la Sala Superior, al haber dejado intocadas las demás conclusiones contenidas en el Dictamen Consolidado **INE/CG299/2017** y, por tanto, las consideraciones que sustentan la Resolución **INE/CG300/2017**, este Consejo General únicamente se abocará a la modificación de la parte conducente del Dictamen Consolidado relativo a las conclusiones **20 y 24**, así como del Considerando **38.1.** de la **Coalición “Juntos por Ti”** por lo que hace al inciso **b)**, relativo a las conclusiones **20 y 24**; así como la parte conducente de su respectivo apartado denominado **Imposición de la Sanción**, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos valer en el considerando precedente, en cumplimiento a lo determinado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ejecutoria materia del presente Acuerdo, en los términos siguientes:

Modificación del Dictamen Consolidado

“(…)

3.7 Coalición “Juntos por Ti” (PAN-PRD-PT-PRS)

Conclusión 20

Eventos

Segundo Periodo

- ♦ De la evidencia obtenida mediante recorridos e información registrada en las actas correspondientes, se observó que de su análisis y de la verificación al SIF existen gastos que omitieron reportar en el informe de campaña, como se muestra en los **Anexos 2, 2.1 al 2.11** del presente oficio y en el cuadro siguiente:

FECHA DE LA VISITA	PROCEDIMIENTO	LUGAR Y DIRECCIÓN DEL EVENTO	ANEXO DEL PRESENTE OFICIO
04-05-2017	Recorrido	Calle México, entre Leandro Ramírez y Guerrero, Xalisco, Nayarit.	2, 2.1 al 2.11
06-05-2017	Recorrido	Concha acústica del Parque la Loma Insurgentes, Tepic, Nayarit	
07-05-2017	Recorrido	Cancha de la colonia Emiliano Zapata, Ixtlán del Río, Nayarit.	
11-05-2017	Recorrido	Calle Hidalgo casi esquina con Puente del Río Club de la tercera edad, Compostela, Nayarit.	
11-05-2017	Recorrido	Mercado municipal de Compostela, Nayarit.	
11-05-2017	Recorrido	Colonia Francisco Villa, Compostela, Nayarit.	
11-05-2017	Recorrido	Calle Filiberto Torres, colonia Centro, Mazatán, Nayarit.	
14-05-2017	Recorrido	Avenida Victoria y Flores Magón, colonia López Mateos, Tepic, Nayarit.	
28-05-2017	Recorrido	Avenida México esquina con Juárez, Tepic, Nayarit.	
27-05-2017	Recorrido	Matamoros entre calle Malecón y José María Morelos, colonia Centro, Amatlán de Cañas, Nayarit.	
21-05-2017	Recorrido	Sebastián Lerdo de Tejada poniente, colonia Centro, Tepic, Nayarit.	

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la observación antes citada le fue notificada mediante el oficio de errores y omisiones núm. INE/UTF/DA/10143/2017 de fecha 13 de junio de 2017, notificado el mismo día.

Fecha de vencimiento del oficio de errores y omisiones: 18 de junio de 2017.

Mediante escrito de respuesta OEA-JPT/106/2017, de fecha 18 de junio de 2017; el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Aclaraciones

Respecto a este punto, se hace referencia a la documentación soporte correspondiente, complementando con número de Póliza donde se adjuntó lo Solicitado.

FECHA DE LA VISITA	PROCEDIMIENTO	LUGAR Y DIRECCIÓN DEL EVENTO	POLIZA DONDE SE RECONOCE EL GASTO CORRESPONDIENTES AL CANDIDATO ANTONIO ECHEVARRIA
04-05-017	Recorrido	Calle México, entre Leandro Ramírez y Guerrero, Xalisco, Nayarit.	PN1/PD-29/29-04-17, PN1/PD-28/29-04-17, PN1/PD-27/29-04-17, PN1/PD-26/29-04-17, PN1/PD-24/29-04-17, PN1/PD-23/26-04-17
06-05-2017	Recorrido	Concha acústica del Parque la Loma Insurgentes, Tepic, Nayarit	PN1/PD-29/29-04-17, PN1/PD-28/29-04-17, PN1/PD-27/29-04-17, PN1/PD-26/29-04-17, PN1/PD-24/29-04-17, PN1/PD-23/26-04-17, PC2/PD-59/31-05-17, PC2/PD-61/31-05-17
07-05-2017	Recorrido	Cancha de la colonia Emiliano Zapata, Ixtlán del Río, Nayarit.	PN1/PD-29/29-04-17, PN1/PD-28/29-04-17, PN1/PD-27/29-04-17, PN1/PD-26/29-04-17, PN1/PD-24/29-04-17, PN1/PD-23/26-04-17
11-05-2017	Recorrido	Calle Hidalgo casi esquina con Puente del Río Club de la tercera edad, Compostela, Nayarit.	PN1/PD-29/29-04-17, PN1/PD-28/29-04-17, PN1/PD-27/29-04-17, PN1/PD-26/29-04-17, PN1/PD-24/29-04-17, PN1/PD-23/26-04-17, PC2/PD-62/31-05-17
11-05-2017	Recorrido	Mercado municipal de Compostela, Nayarit.	PN1/PD-29/29-04-17, PN1/PD-28/29-04-17, PN1/PD-27/29-04-17, PN1/PD-26/29-04-17, PN1/PD-24/29-04-17, PN1/PD-23/26-04-17, PC2/PD-60/31-05-17
11-05-2017	Recorrido	Colonia Francisco Villa, Compostela, Nayarit.	PN1/PD-29/29-04-17, PN1/PD-28/29-04-17, PN1/PD-27/29-04-17, PN1/PD-26/29-04-17, PN1/PD-24/29-04-17, PN1/PD-23/26-04-17
11-05-2017	Recorrido	Calle Filiberto Torres, colonia Centro, Mazatlán, Nayarit.	PN1/PD-29/29-04-17, PN1/PD-28/29-04-17, PN1/PD-27/29-04-17, PN1/PD-26/29-04-17, PN1/PD-24/29-04-17, PN1/PD-23/26-04-17
14-05-2017	Recorrido	Avenida Victoria y Flores Magón, colonia López Mateos, Tepic, Nayarit.	PN1/PD-29/29-04-17, PN1/PD-28/29-04-17, PN1/PD-27/29-04-17, PN1/PD-26/29-04-17, PN1/PD-24/29-04-17, PN1/PD-23/26-04-17
28-05-2017	Recorrido	Avenida México esquina con Juárez, Tepic, Nayarit.	PN2/PD-202/29-05-17
27-05-2017	Recorrido	Matamoros entre calle Malecón y José María Morelos, colonia Centro, Amatlán de Cañas, Nayarit.	PN2/PD-191/29-05-17
21-05-2017	Recorrido	Sebastián Lerdo de Tejada poniente, colonia Centro, Tepic, Nayarit.	PN2/PD-107/25-05-17, PN1/PD-29/29-04-17, PC2/PD-58/31-03-17, PC2/PD1-6/31-05/17, PC2/PD1-6/31-05/17, PC2/PD1-4/31-05/17, PC2/PD1-3/31-05/17

De la verificación al SIF, así como el análisis a las aclaraciones presentadas por el sujeto obligado, se determinó lo siguiente:

Por lo que corresponde a la propaganda señalada con (1) en la columna “Referencia” del **Anexo 5** del presente Dictamen, el sujeto obligado presentó las pólizas detalladas en el cuadro que antecede, con la documentación soporte consistente en facturas por concepto de arrendamiento de template, escenario mobiliario y equipo de sonido audiovisual para eventos, arrendamiento de vehículos rotulados y arrendamiento de baños públicos, así como los contratos de arrendamientos con la totalidad de requisitos establecidos en la normativa, razón por lo cual la observación **quedó atendida**.

Por lo que corresponde a la propaganda señalada con (2) en la columna “Referencia”, del **Anexo 5, 5.1 al 5.11** del presente Dictamen, aun y cuando el sujeto obligado presentó pólizas con el registro de los gastos efectuados, estos no

corresponden a los detectados por la autoridad, razón por lo cual la observación **no quedó atendida**.

Determinación del Costo

- ❖ Se consideró información relacionada en los registros contables presentados a través del Sistema Integral de Fiscalización por los partidos políticos en el estado de Nayarit.
- ❖ En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran ser comparables con los gastos no reportados.
- ❖ Una vez identificados los registros similares se procedió a identificar el valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o gastos no reportados por el sujeto obligado.
- ❖ En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos obligados, no contenía un registro similar, se procedió a recabar información reportada por los candidatos en el RNP.
- ❖ De la matriz de precios que se presenta en el **Anexo Único** de este Dictamen, se determinó que las facturas presentadas por diversos proveedores, eran las que más se ajustaban en términos de unidad de medida, ubicación y demás características, por lo que, se tomó como base para la determinación del costo.

Matriz de precios determinada por la UTF.

Con base en los registros de los sujetos obligados en la entidad.

Sujeto obligado	Proveedor o Aportante	Comprobante	RFC	Concepto	Costo Unitario
PRI	Wixarika Gráfica S.A.De C.V.	536	WGR1507131N6	Lonas (m2)	348.00
PRI	José Waldo Juárez Armas	25	JUAW7504307D6	Servicio de música para cierre de campaña	24,529.65
PRI	Alberto Gabriel Abrego	SN	GOAA720731J5A	Bandera	167.04
Juntos por ti	Corporativo CHEMA S.A. De C.V.	4112	CCE091126F73	Un templete de 12x5 m en evento	10,246.20
Candidatura independiente	Gráficas e impresiones de Alica S.A. De C.V.	2556	GIA871028775	Banderín	54.52
Juntos por ti	PM Creative S.A. de C.V.	1792	PCR140422TU1	Rotulación de camioneta	9,280.00

Sujeto obligado	Proveedor o Aportante	Comprobante	RFC	Concepto	Costo Unitario
PRI	Gerencia Administración y Progreso S.A. De C.V.	106	GAP130515JF3	Renta de Vehículo	1,113.60
Candidatura Independiente	Héctor Armando Yereña Sánchez	16	YESH720901PE9	Servicio de Perifoneo	1,428.57
PRI	José Luis Quevedo Lerma	32	QULL790914QE2	Gorras impresas	63.51
PRI	Olivia Becerra Rodríguez	288	BERO9103133F2	Sombrillas	40.00
Juntos por ti	PM CREATIVE S.A. De C.V.	1736	PCR140422TU1	Mandiles	34.80
Juntos por ti	PM CREATIVE S.A. De C.V.	1780	PCR140422TU1	Pendón	42.14
MC	Martina Toro Mora	218	TOMM7003208W9	Volantes tamaño media carta impresos frente y vuelta en papel couché	.93
MC	Salón de Eventos María Magdalena S.A. De C.V.	605	SEM1401223L1	Renta de salón	69,600.00
Juntos por ti	PM Creative S.A. De C.V.	1759	PCR140422TU1	Playera tipo polo bordada	278.40
Candidatura independiente	Sergio Alejandro Aguirre Alcalá	125	AUAS800704MU6	Transporte de personal	20,000.00
Nayarit de todos	Juan De Dios Martínez Anchondo	A6011	MAAJ720102MS1	Servicio de una moto	1,499.94
PRI	Wixaryka Grafica S.A. de C.V.	536	WGR1507131N6	Bastidores	348.00

Nota: Se adjunta el Anexo Único al Dictamen Consolidado, la Matriz de Precios correspondiente al estado de Nayarit.

- ❖ Una vez obtenido el costo de los gastos no reportados, se procedió a determinar su valor de la forma siguiente:

Concepto	Unidades	Unidad de Medida	Costo unitario	Importe a acumular
		(A)	(B)	(A)*(B)= C
Manta 4 x 4 m	6	m2	\$348.00	\$33,408.00
Manta 2 x 2 m	5	m2	348.00	6,960.00
Lona 2.5 x 2.5	1	m2	348.00	2,175.00
Lona 5 x 5	2	m2	348.00	17,400.00
Lona 3 x 1.5	1	m2	348.00	1,566.00
Lona 5 x 2.5	1	m2	348.00	4,350.00
Lonas 3 x 1.5	1	m2	348.00	1,566.00
Lona 1.10 x 2.5	2	m2	348.00	1,914.00
Lona 1 x 1	1	m2	348.00	348.00
Lona 1.50 x 1.20	1	m2	348.00	626.40
Lona 2.5 x 1	11	m2	348.00	9,570.00
Lonas 2 x 1	11	m2	348.00	7,656.00
Lona 3 x 2	1	m2	348.00	2,088.00
Lonas 9 x 3	1	m2	348.00	9,396.00
Lonas 8 x 5	1	m2	348.00	13,920.00
Bastidor 1 x 1.80	1	Pieza	348.00	348.00
Grupo musical	1	Servicio	24,529.65	24,529.65

Concepto	Unidades	Unidad de Medida	Costo unitario	Importe a acumular
		(A)	(B)	(A)*(B)= C
Banderas	2,918	Pieza	167.04	487,422.72
Banderines	500	Pieza	54.52	27,260.00
Playeras	1,050	Pieza	278.40	292,320.00
Renta de camioneta	2	Pieza	1,113.60	2,227.20
Paraguas	30	Pieza	40.00	1,200.00
Gorras	50	Pieza	63.51	3,175.50
Mandiles	100	Pieza	34.80	3,480.00
Perifoneo	5	Servicio	1,428.57	7,142.85
Volantes	1500	Pieza	.93	1,395.00
Inmueble	1	Servicio	69,600.00	69,600.00
Renta de automóviles	2	Servicio	1,113.60	2,227.20
Renta de camiones	2	Servicio	20,000.00	40,000.00
Motocicletas	5	Servicio	1,499.94	7,499.70
Total del gasto no reportado				\$1,082,771.22

Al omitir reportar gastos por concepto de realización gastos operativos y de propaganda en eventos públicos, valuados en \$1,082,771.22, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP y 127 del RF. **(Conclusión 20.COA/NAY).**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2, de la LGIPE, el costo determinado se acumulará al tope de gastos de campaña.

Esta autoridad procedió en acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a modificar la determinación de costos de los gastos no reportados de la conclusión 20 determinándose lo siguiente:

Atendiendo a los requerimientos de la máxima autoridad jurisdiccional, esta autoridad fiscalizadora en acatamiento a esta ejecutoria procedió a realizar nuevamente la determinación del costo de productos tales como banderas y playeras, considerando tamaño y tipo de propaganda, como a continuación se indica:

CONSECUTIVO	CANDIDATO	FECHA DE VERIFICACION	CANTIDAD	PROPAGANDA ELECTORAL O INFORMACIÓN LOCALIZADA (DESCRIPCIÓN DETALLADA)
1	Antonio Echevarría García	04/05/2017	8	Banderas Logo del Prd 2x2
			50	Playeras de campaña con el logo de Nadia Ramírez
2		06/05/2017	4	Banderas de pt de 2x2
5		11/05/2017	1	Bandera con el logo del PAN, PRD, PT Y PRS
6		11/05/2017	7	Banderas blancas de prs medidas 1.50 x 1 mts

CONSECUTIVO	CANDIDATO	FECHA DE VERIFICACION	CANTIDAD	PROPAGANDA ELECTORAL O INFORMACIÓN LOCALIZADA (DESCRIPCIÓN DETALLADA)
8		14/05/2017	50	Banderas amarillas con logo PRD 3 X 1 mts
9		28/05/2017	150	Banderas de 2x2 amarillas
			20	banderas de 3x4 metros
			100	Banderas PRS blancas de .50x.30 cms
			200	banderas de PAN de .60x.60cms
			300	Bandera Azul de Toño Echevarría de .80x.80cms
			50	Banderas de 3x3metros amarillas de PRD de Javier Castellón presidente
20		Banderas azul rey lisas de 1x2 metros		
11		21/05/2017	1000	Banderas del PAN 50x30
	8		banderas de 2x2 con el lema de Toño Echavarría y Javier Castellón	
	1000		Banderas 50x30	
	1000		Playeras de campaña del PRD	

Cabe señalar que para llevar acabo la determinación del costo de banderas y playeras, esta autoridad tomo en cuenta las características específicas de dichos productos, mismas que coinciden con lo observado en archivos fotográficos contenidos en las actas de verificación.

Para el caso de las banderas se consideraron las siguientes características:

- Dimensiones
- Tipo de material (textil)
- La impresión de algún logo de la coalición, partido o candidato

Para el caso de las playeras se consideraron las siguientes características:

- Tipo de cuello (redondo o en “v”)
- Tipo de Manga (corta o larga)
- Tipo de estampado

ID	Tipo de Producto	Características de los productos señalados en el Dictamen Consolidado	Características de los productos señalados en la Matriz de Precios	Observaciones
1	Playeras	Material textil (tela)	Material textil (tela)	Ambos productos son de material textil
		Estampado con el logo del candidato	Estampado por el frente	Ambas playeras tienen estampado
		Manga corta	Manga corta	Ambas playeras son de manga corta
		Cuello redondo	Cuello redondo	Ambos productos son de cuello redondo

ID	Tipo de Producto	Características de los productos señalados en el Dictamen Consolidado	Características de los productos señalados en la Matriz de Precios	Observaciones
2	Banderas	Material textil (tela)	Material textil (tela)	Ambos productos son de material textil
		Impresas con logo institucional y del candidato	Impreso por ambos lados con logo institucional (2 tintas)	Ambas banderas se encuentran impresas por ambos lados
		Con palo de madera	Con palo de madera	Ambos productos tienen a modo de asta un palo de madera
		Dimensiones diversas	Dimensiones 1.30X1.00 mts.	La determinación del costo se realizó tomando en consideración el metro cuadrado del producto señalado en la Matriz de Precios, toda vez que aquellos observados en el Dictamen poseen medidas diversas.

Derivado de lo anterior se procedió a realizar nuevamente la determinación del costo de dichos productos.

Determinación del Costo

- ❖ Se consideró información relacionada en los registros contables presentados a través del Sistema Integral de Fiscalización por los partidos políticos en el estado de Nayarit.
- ❖ En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran ser comparables con los gastos no reportados.
- ❖ Una vez identificados los registros similares se procedió a identificar el valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o gastos no reportados por el sujeto obligado.
- ❖ En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos obligados, no contenía un registro similar, se procedió a recabar información reportada por los candidatos en el RNP.
- ❖ De la matriz de precios que se presenta en el **Anexo Único** de este Dictamen, se determinó que las facturas presentadas por diversos proveedores, eran las que más se ajustaban en términos de unidad de medida, ubicación y demás características, por lo que, se tomó como base para la determinación del costo.

Matriz de precios determinada por la UTF.

Con base en los registros de los sujetos obligados en la entidad.

Sujeto obligado	Proveedor o Aportante	Comprobante	RFC	Concepto	Costo aproximado del metro cuadrado
PAN	Oscar Ulises Piñón García	AFAD10	PIGO87052942 A	Bandera 1.30x1.00 impresa a 2 tintas con logo institucional del PAN y palo de madera	\$30.74

Sujeto obligado	Proveedor o Aportante	Comprobante	RFC	Concepto	Costo Unitario
PRI	Euro Publicidad Exterior, S de R.L, de C.V,	142	EPE150406R33	Playeras cuello redondo manga corta estampadas	\$63.80

Notas:

- Las facturas antes citadas fueron seleccionadas debido a que son las que más se asemejan en cuestión de características a los productos observados en las actas de verificación.
- Se adjunta el Anexo Único al Dictamen Consolidado, la Matriz de Precios correspondiente al estado de Nayarit.

- ❖ Una vez obtenido el costo de los gastos no reportados, se procedió a determinar su valor de la forma siguiente:

Concepto	Unidades	Metros cuadrados / Unidades	Costo por unidad / metro cuadrado	Importe a acumular
	(A)	(B)	(C)	(A)*(B)*(C)=(D)
Manta 4 x 4 m	6	16 m2	\$348.00	\$33,408.00
Manta 2 x 2 m	5	4 m2	348.00	6,960.00
Lona 2.5 x 2.5	1	6.25 m2	348.00	2,175.00
Lona 5 x 5	2	25 m2	348.00	17,400.00
Lona 3 x 1.5	1	4.5 m2	348.00	1,566.00
Lona 5 x 2.5	1	12.5 m2	348.00	4,350.00
Lonas 3 x 1.5	1	4.5 m2	348.00	1,566.00
Lona 1.10 x 2.5	2	2.75 m2	348.00	1,914.00
Lona 1 x 1	1	1 m2	348.00	348.00
Lona 1.50 x 1.20	1	1.8 m2	348.00	626.40
Lona 2.5 x 1	11	2.5 m2	348.00	9,570.00
Lonas 2 x 1	11	2 m2	348.00	7,656.00
Lona 3 x 2	1	6 m2	348.00	2,088.00
Lonas 9 x 3	1	27 m2	348.00	9,396.00
Lonas 8 x 5	1	40 m2	348.00	13,920.00
Bastidor 1 x 1.80	1	1 Pieza	348.00	348.00
Grupo musical	1	1 Servicio	24,529.65	24,529.65
Banderas 2x2m	162	4 m2	30.74	\$19,919.52
Banderas 50x30 cm	2,101	0.15 m2	30.74	\$9,687.71
Banderas 1x2m	20	2 m2	30.74	\$1,229.60
Banderas 3x3m	50	9 m2	30.74	\$13,833.00
Banderas 2x2.5m	8	5 m2	30.74	\$1,229.60

Concepto	Unidades	Metros cuadrados / Unidades	Costo por unidad / metro cuadrado	Importe a acumular
	(A)	(B)	(C)	(A)*(B)*(C)=(D)
Banderas 80x80cm	300	0.64 m2	30.74	\$5,902.08
Banderas 60x60cm	200	0.36 m2	30.74	\$2,213.28
Banderas 3x4m	20	12 m2	30.74	\$7,377.60
Banderas 3x1m	50	3 m2	30.74	\$4,611.00
Banderas 1.5x1m	7	1.5 m2	30.74	\$322.77
Banderines	500	Piezas	54.52	27,260.00
Playeras	1,050	Piezas	63.80	66,990.00
Renta de camioneta	2	Piezas	1,113.60	2,227.20
Paraguas	30	Piezas	40.00	1,200.00
Gorras	50	Piezas	63.51	3,175.50
Mandiles	100	Piezas	34.80	3,480.00
Perifoneo	5	Piezas	1,428.57	7,142.85
Volantes	1500	Piezas	0.93	1,395.00
Inmueble	1	1 Servicio	69,600.00	69,600.00
Renta de automóviles	2	Servicios	1,113.60	2,227.20
Renta de camiones	2	Servicios	20,000.00	40,000.00
Motocicletas	5	Servicios	1,499.94	7,499.70
Total del gasto no reportado				\$436,344.66

Al omitir reportar gastos por concepto de realización gastos operativos y de propaganda en eventos públicos, valuados en \$436,344.66, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP y 127 del RF. **(Conclusión 20.COA/NAY).**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2, de la LGIPE, el costo determinado se acumulará al tope de gastos de campaña, mismo que se refleja en el Anexo II del presente acatamiento.

Conclusión 24

b.2 Monitoreos

Páginas de Internet y Redes sociales

Segundo Periodo

- ♦ *Derivado del monitoreo se observó propaganda que no fue reportada en el informe, como se muestra en el **Anexo 7, 7.1 al 7.26** del presente oficio.*

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la observación antes citada le fue notificada mediante el oficio de errores y omisiones

núm. INE/UTF/DA/10143/2017 de fecha 13 de junio de 2017, notificado el mismo día.

Fecha de vencimiento del oficio de errores y omisiones: 18 de junio de 2017.

Mediante escrito de respuesta OEA-JPT/106/2017, de fecha 18 de junio de 2017; el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Aclaraciones:

Hago referencia a las pólizas, de la propaganda derivada del informe realizado, concerniente a las páginas de internet y redes sociales, mediante el siguiente cuadro;

	NUMERO DE LA POLIZA
POLIZA CONTABLE DONDE SE RECONOCIO EL GASTO	PN2/PD-209/31/05/2017
POLIZA CONTABLE DONDE SE RECONOCIO EL GASTO	PN2/PD-183/30/05/2017
POLIZA CONTABLE DONDE SE RECONOCIO EL GASTO	PN2/PD-182/30/05/2017
POLIZA CONTABLE DONDE SE RECONOCIO EL GASTO	PN1/PD-29/29/04/2017
POLIZA CONTABLE DONDE SE RECONOCIO EL GASTO	PN2/PD-139/29/05/2017
POLIZA CONTABLE DONDE SE RECONOCIO EL GASTO	PN2/PD-127/29/05/2017
POLIZA CONTABLE DONDE SE RECONOCIO EL GASTO	PN2/PD-167/30/05/2017
POLIZA CONTABLE DONDE SE RECONOCIO EL GASTO	PN1/PD-29/29/04/2017
POLIZA CONTABLE DONDE SE RECONOCIO EL GASTO	PN2/PD-138/29/05/2017

”.

Del análisis a las aclaraciones y documentación presentada mediante el SIF, se determinó lo que a continuación se indica.

Por lo que corresponde a la propaganda señalada con (1) en la columna “Referencia” en el **Anexo 6**, se constató que presentó el total de la documentación soporte comprobatoria que ampara los gastos realizados en lonas, consistente en facturas, contrato de compra venta, copia de transferencia y muestras; por tal razón la observación **quedó atendida**.

Respecto a los gastos señalados con (2) en la columna “Referencia” del **Anexo 6, 6.1 al 6.8** del presente Dictamen, el sujeto obligado omitió reportar los gastos realizados; por tal razón, la observación **no quedó atendida**.

Derivado de lo anterior, la UTF procedió a cuantificar los ingresos y egresos no reportados por el sujeto obligado, para lo cual se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF, como se describe a continuación:

Determinación del Costo

- ❖ Se consideró información relacionada en los registros contables presentados a través del Sistema Integral de Fiscalización por los partidos políticos en el estado de Nayarit.
- ❖ En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran ser comparables con los gastos no reportados.
- ❖ Una vez identificados los registros similares se procedió a identificar el valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o gastos no reportados por el sujeto obligado.
- ❖ En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos obligados, no contenía un registro similar, se procedió a recabar información reportada por los candidatos en el RNP.
- ❖ De la matriz de precios que se presenta en el **Anexo Único** de este Dictamen, se determinó que las facturas presentadas por diversos proveedores, eran las que más se ajustaban en términos de unidad de medida, ubicación y demás características, por lo que, se tomó como base para la determinación del costo.

Matriz de precios determinada por la UTF.

Con base en los registros de los sujetos obligados en la entidad.

Sujeto obligado	Proveedor o Aportante	Comprobante o Recibo Aportación	RFC	Concepto	Costo unitario
MORENA	Fantasmas Films S.A. De C.V.	37	FFI000302GZ3	Producción de spot para radio y TV	\$115,081.66
PRI	Wixarika Gráfica S.A.De C.V.	536	WGR1507131N6	Lonas (m2)	348.00
Juntos Por Ti	Administradora de Servicios Fortem, S. de R.L. de C.V.	1104	ASF150428FD9	Renta de Equipo de Sonido	4,350.00
Juntos Por Ti	Administradora de Servicios Fortem, S. de R.L. de C.V.	1119	ASF150428FD9	Renta de Sillas	139.20
Juntos Por Ti	PM Creative S.A. de C.V.	1738	PSR140422TU1	Camisa Manga Larga	464.00
Juntos Por Ti	Corporativo Chema S.A de C.V	4112	CCE091126F73	Templete	10,246.20

Sujeto obligado	Proveedor o Aportante	Comprobante o Recibo Aportación	RFC	Concepto	Costo unitario
PRI	Alberto Gabriel Abrego	SN	GOAA720731J5A	Bandera	167.04

Nota: Se adjunta el Anexo Único al Dictamen Consolidado, la Matriz de Precios correspondiente al Estado de Nayarit.

- ❖ Una vez obtenido el costo de los gastos no reportados, se procedió a determinar su valor de la forma siguiente:

Concepto	Unidades	Unidad de Medida	Costo unitario	Importe a acumular
		(A)	(B)	(A)*(B)= C
Producción de un video con edición y producción	5	Servicio	\$115,081.66	\$575,408.30
Lona de 4x3	1	Mt2	348.00	4,176.00
Manta de 3x2	14	Mt2	348.00	29,232.00
Renta de equipo de sonido	3	Servicio	4,350.00	13,050.00
Renta de Sillas	100	Servicio	139.20	13,920.00
Camisa manga larga	5	Pieza	464.00	2,320.00
Templete	2	Servicio	10,246.20	20,492.40
Banderas	11	Pieza	167.04	1,837.44
Total del gasto no reportado				\$660,436.14

Al omitir reportar gastos por concepto de propaganda valuados en \$660,436.14, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP y 127 del RF. **(Conclusión 24.COA/NAY).**

Esta autoridad procedió en acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a modificar la determinación de costos de los gastos no reportados de la conclusión 24 determinándose lo siguiente:

De lo manifestado por la máxima autoridad jurisdiccional y de la verificación al Anexo 6 del Dictamen Consolidado, se constató que en lo concerniente a la publicidad alojada en las redes sociales Facebook y YouTube, señalada como, 1 F-13 y 6 F-PO-COA-PAN-1, corresponde a una sola versión de videos, y aun mismo contenido, no así a dos omisiones; por tal razón, esta autoridad fiscalizadora a efectos de dar certeza a los hallazgos detectados procedió a realizar las correcciones procedentes en la determinación del gasto no reportado descontando dicho video.

Así mismo, considerando que en los recursos de apelación expedientes, SG-RAP-142/2017 y SG-RAP-143/2017, iniciados por partidos políticos integrantes de la coalición se ordenó realizar nuevamente la determinación de costos de diversa propaganda y/o servicios adquiridos en términos de unidad de medida, ubicación y

demás características, tal es el caso de sillas, banderas y equipo de sonido que son parte integrante de la presente conclusión, se procedió a realizar las correcciones procedentes en la determinación del gasto no reportado, como a continuación se indica:

Determinación del Costo

- ❖ Se consideró información relacionada en los registros contables presentados a través del Sistema Integral de Fiscalización por los partidos políticos en el estado de Nayarit.
- ❖ En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran ser comparables con los gastos no reportados.
- ❖ Una vez identificados los registros similares se procedió a identificar el valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o gastos no reportados por el sujeto obligado.
- ❖ En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos obligados, no contenía un registro similar, se procedió a recabar información reportada por los candidatos en el RNP.
- ❖ De la matriz de precios que se presenta en el **Anexo Único** de este Dictamen, se determinó que las facturas presentadas por diversos proveedores, eran las que más se ajustaban en términos de unidad de medida, ubicación y demás características, por lo que, se tomó como base para la determinación del costo.

Matriz de precios determinada por la UTF.

Con base en los registros de los sujetos obligados en la entidad.

Sujeto obligado	Proveedor o Aportante	Comprobante o Recibo Aportación	RFC	Concepto	Costo unitario
MORENA	Fantasmas Films S.A. De C.V.	37	FFI000302GZ3	Producción de spot para radio y TV	\$115,081.66
PRI	Wixarika Gráfica S.A.De C.V.	536	WGR1507131N6	Lonas (m2)	348.00
Juntos Por Ti	Administradora de Servicios Fortem, S. de R.L. de C.V.	1115	ASF150428FD9	Renta de Equipo de Sonido	174.00
Carlos Alberto Sáldate Castillón	Gregorio Aranda Rivera	184B	AARG70525DMB	Renta de Sillas	5.80
Juntos Por Ti	PM Creative S.A. de C.V.	1738	PSR140422TU1	Camisa Manga Larga	464.00
Juntos Por Ti	Corporativo Chema S.A de C.V	4112	CCE091126F73	Templete	10,246.20
Partido Acción Nacional	Oscar Ulises Piñón García	AFAD10	PIGO87052942A	Bandera Institucional con palo de madera 130x100	30.74

Nota: Se adjunta el Anexo Único al Dictamen Consolidado, la Matriz de Precios correspondiente al Estado de Nayarit.

- ❖ Una vez obtenido el costo de los gastos no reportados, se procedió a determinar su valor de la forma siguiente:

Concepto	Unidades	Unidad de Medida	Costo unitario	Importe a acumular
		(A)	(B)	(A)*(B)= C
Producción de un video con edición y producción	4	Servicio	\$115,081.66	\$460,326.64
Lona de 4x3	1	Mt2	348.00	4,176.00
Manta de 3x2	14	Mt2	348.00	29,232.00
Renta de equipo de sonido	3	Servicio	174.00	522.00
Renta de Sillas	100	Pieza	5.80	580.00
Camisa manga larga	5	Pieza	464.00	2,320.00
Templete	2	Servicio	10,246.20	20,492.40
Banderas medida estándar 1x1	11	Mt2	30.74	338.14
Total del gasto no reportado				\$517,987.18

Al omitir reportar gastos por concepto de propaganda valuados en \$517,987.18, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP y 127 del RF. **(Conclusión 24.CO/NAY).**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2, de la LGIPE, el costo determinado se acumulará al tope de gastos de campaña, mismo que se refleja en el Anexo II del presente acatamiento.

Conclusiones de la revisión a los informes de ingresos y gastos de campaña al cargo de Gobernador, Diputado Local, Presidente Municipal y Regidor, presentados por el sujeto obligado, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit.

Ahora bien, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las ejecutorias SUP-RAP-196/2017 y SUP-RAP-208-2017 Acumulados del Partido de la Revolución Democrática y del Partido de Trabajo respecto a las conclusiones 20 y 24, por lo que una vez realizadas las modificaciones correspondientes se procede a señalar lo siguiente:

20. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de publicidad en vía pública, valuados en \$436,344.66

Tal situación incumple lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b) de la LGPP y 127 del RF.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2, de la LGIPE, el costo determinado se acumulará al tope de gastos de campaña, mismo que se refleja en el Anexo II del presente acatamiento.

24. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos derivados del monitoreo de internet por concepto de propaganda y operativos valuados en \$517,987.18.

Tal situación incumple lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b) de la LGPP y 127 del RF.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2, de la LGIPE, el costo determinado se acumulará al tope de gastos de campaña, mismo que se refleja en el Anexo II del presente acatamiento.

(...)"

Modificación de la Resolución

"(...)

31.8 COALICIÓN "JUNTOS POR TI".

(...)

b) 25 Faltas de carácter sustancial: Conclusiones 7, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 45, 46, 58, 59, 60, 61, 67, 71, 72, 73, 75 y 76.

(...)

a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias infractoras de los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización: conclusiones 7, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 45, 46, 58, 59, 60, 61, 67, 71, 72, 73, 75 y 76.

Conclusión	Conducta específica	Monto involucrado
7	7. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos por el uso de inmuebles para la realización de eventos públicos por \$765,600.00	\$765,600.00
16	16. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de mandiles, trípticos, calcomanías y lonas, valuados en \$149,524.00.	\$149,524.00
19	19. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos por 450 Banderas, por un monto de \$75,836.16.	\$75,836.16
20	20. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de publicidad en vía pública, valuados en \$436,344.66	\$436,344.66
23	23. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos derivados del monitoreo de internet por concepto de publicidad en vía pública por \$141,776.36	\$141,776.36
24	24. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos derivados del monitoreo de internet por concepto de propaganda y operativos valuados en \$517,987.18.	\$517,987.18.
25	25. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de monitoreo de prensa, valuados en \$83,520.00	\$83,520.00
26	26. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de producción de spots de radio y tv, valuados en \$460,326.64 valuación spots segundo periodo	\$460,326.64
27	27. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de publicidad en vía pública, valuados en \$887,899.69	\$887,899.69
28	28. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de publicidad en vía pública, valuados en \$1,124,870.90	\$1,124,870.90
29	29. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de publicidad en vía pública, valuados en \$701,887.50	\$701,887.50

Conclusión	Conducta específica	Monto involucrado
36	36. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de propaganda en Facebook, valuado en \$532,789.08.	\$532,789.08
37	37. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de propaganda en Twitter, valuado en \$6,092.22.	\$6,092.22
45	45. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de propaganda y publicidad valuados en \$1508.00	\$1,508.00
46	46. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto propaganda y publicidad en vía pública, valuados en \$69,815.60	\$69,815.60
58	58. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de propaganda, valuados en \$54,155.84	\$54,155.84
59	59. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de propaganda y operativos, valuados en \$1,374,396.87	\$1,374,396.87
60	60. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos identificados con motivo de los recorridos, valuados en \$534,152.95	\$534,152.95
61	61. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de publicidad en vía pública, valuados en \$240,895.87	\$240,895.87
67	67. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto del arrendamiento de casa de campaña, valuados en \$34,800.00	\$34,800.00
71	71. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos derivados de recorridos, valuados en \$16,020.60	\$16,020.60
72	72. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de propaganda, valuados en \$4,837.20	\$4,837.20
73	73. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de propaganda, valuados en \$709.92	\$709.92
75	75. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de propaganda y operativos, valuados en \$183,619.83	\$183,619.83

Conclusión	Conducta específica	Monto involucrado
76	76. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de spots de radio y tv, valuados en \$1,035,734.97	\$1,035,734.97

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación, se hicieron del conocimiento de la coalición a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de cada conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar las observaciones realizadas.

(...)

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito, se identificó que el sujeto obligado **omitó reportar los gastos realizados** en el informe de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos de los partidos políticos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit.

En el caso a estudio, las faltas corresponden a diversas **omisiones** consistentes en incumplir con su obligación de reportar los gastos realizados durante la campaña conforme a lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.²

² Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado omitió reportar los gastos realizados en el Informe de Campaña por un monto de **\$9,435,102.04 (Nueve millones cuatrocientos treinta y cinco mil ciento dos pesos 04/100 M.N.)**, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refieren las irregularidades observadas:

Conclusión	Conducta específica
7	7. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos por el uso de inmuebles para la realización de eventos públicos por \$765,600.00
16	16. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de mandiles, trípticos, calcomanías y lonas, valuados en \$149,524.00.
19	19. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos por 450 Banderas, por un monto de \$75,836.16.
20	20. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de publicidad en vía pública, valuados en \$436,344.66
23	23. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos derivados del monitoreo de internet por concepto de publicidad en vía pública por \$141,776.36
24	24. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos derivados del monitoreo de internet por concepto de propaganda y operativos valuados en \$517,987.18.
25	25. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de monitoreo de prensa, valuados en \$83,520.00
26	26. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de producción de spots de radio y tv, valuados en \$460,326.64 valuación spots segundo periodo
27	27. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de publicidad en vía pública, valuados en \$887,899.69

Conclusión	Conducta específica
28	28. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de publicidad en vía pública, valuados en \$1,124,870.90
29	29. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de publicidad en vía pública, valuados en \$701,887.50
36	36. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de propaganda en Facebook, valuado en \$532,789.08.
37	37. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de propaganda en Twitter, valuado en \$6,092.22.
45	45. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de propaganda y publicidad valuados en \$1508.00
46	46. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto propaganda y publicidad en vía pública, valuados en \$69,815.60
58	58. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de propaganda, valuados en \$54,155.84
59	59. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de propaganda y operativos, valuados en \$1,374,396.87
60	60. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos identificados con motivo de los recorridos, valuados en \$534,152.95
61	61. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de publicidad en vía pública, valuados en \$240,895.87
67	67. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto del arrendamiento de casa de campaña, valuados en \$34,800.00
71	71. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos derivados de recorridos, valuados en \$16,020.60
72	72. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de propaganda, valuados en \$4,837.20

Conclusión	Conducta específica
73	73. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de propaganda, valuados en \$709.92
75	75. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de propaganda y operativos, valuados en \$183,619.83
76	76. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de spots de radio y tv, valuados en \$1,035,734.97

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017 en el estado de Nayarit, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

(...)

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que las infracciones deben calificarse como **GRAVES ORDINARIAS**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

(...)

Conclusión 20

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.

- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017 en el estado de Nayarit, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$436,344.66 (Cuatrocientos treinta y seis mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 66/100 M.N.).
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.³

³ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica equivalente al **150% (ciento cincuenta por ciento)** sobre el monto involucrado \$436,344.66 (Cuatrocientos treinta y seis mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 66/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de **\$654,516.99 (Seiscientos cincuenta y cuatro mil quinientos dieciséis pesos 99/100 M.N.)**.

Asimismo, y por cuanto hace al **Partido de la Revolución Socialista**, atendiendo a las particularidades referidas anteriormente, lo conducente es imponerle la sanción prevista en la fracción I del artículo previamente citado, consistente en una **Amonestación Pública**.

En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Acción Nacional** en lo individual lo correspondiente al **40.67%** (Cuarenta punto sesenta y siete) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una reducción del **50%** (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$266,192.05 (Doscientos sesenta y seis mil ciento noventa y dos pesos 05/100 M.N.)**.

Asimismo, al **Partido de la Revolución Democrática** en lo individual lo correspondiente al **35.38%** (Treinta y ocho por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una reducción del **50%** (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$231,568.11 (Doscientos treinta y un mil quinientos sesenta y ocho pesos 11/100 M.N.)**.

De igual forma, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido del Trabajo** en lo individual lo correspondiente al **19.32%** (Diecinueve punto treinta y dos) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a

dicho instituto político es una reducción del **50%** (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$126,452.68 (Ciento veintiséis mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 68/100 M.N.)**.

(...)

Conclusión 24

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017 en el estado de Nayarit, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$517,987.18 (Quinientos diecisiete mil novecientos ochenta y siete pesos 18/100 M.N.).

- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁴

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica equivalente al **150% (ciento cincuenta por ciento)** sobre el monto involucrado \$517,987.18 (Quinientos diecisiete mil novecientos ochenta y siete pesos 18/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de **\$776,980.77 (Setecientos setenta y seis mil novecientos ochenta pesos 77/100 M.N.)**.

Asimismo, y por cuanto hace al **Partido de la Revolución Socialista**, atendiendo a las particularidades referidas anteriormente, lo conducente es imponerle la sanción prevista en la fracción I del artículo previamente citado, consistente en una **Amonestación Pública**.

⁴ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Acción Nacional** en lo individual lo correspondiente al **40.67%** (Cuarenta punto sesenta y siete) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una reducción del **50%** (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$315,998.07 (Trescientos quince mil novecientos noventa y ocho pesos 07/100 M.N.)**.

Asimismo, al **Partido de la Revolución Democrática** en lo individual lo correspondiente al **35.38%** (Treinta y ocho por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una reducción del **50%** (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$274,895.79 (Doscientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y cinco pesos 79/100 M.N.)**.

De igual forma, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido del Trabajo** en lo individual lo correspondiente al **19.32%** (Diecinueve punto treinta y dos) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una reducción del **50%** (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$150,112.68 (Ciento cincuenta mil ciento doce pesos 68/100 M.N.)**.

(...)

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

(...)

8. Que a continuación se detalla la sanción originalmente impuesta al Partido del Trabajo en la Resolución INE/CG300/2017, en su Resolutivo **OCTAVO**, así como las modificaciones procedentes de acuerdo a lo razonado en el presente Acuerdo:

Resolución INE/CG300/2017			Acuerdo por el que se da cumplimiento		
Conclusiones	Monto Involucrado	Sanción	Conclusiones	Monto Involucrado	Sanción
20	N/A	Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$1,624,156.83 (un millón seiscientos veinticuatro pesos cientos cincuenta y seis pesos 83/100 M.N.).	20	N/A	Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$654,516.99 (Seiscientos cincuenta y cuatro mil quinientos dieciséis pesos 99/100 M.N.).
24	N/A	Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$990,654.21 (novecientos noventa mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 21/100 M.N.).	24	N/A	Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$776,980.77 (Setecientos setenta y seis mil novecientos ochenta pesos 77/100 M.N.).

9. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en los Considerandos **4, 5, 6, 7 y 8** del Acuerdo de mérito, por lo que hace a las **conclusiones 24 y 24**, se modifica el Punto Resolutivo **OCTAVO** para quedar de la manera siguiente:

(...)

R E S U E L V E

(...)

OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando **31.8** de la presente Resolución, se imponen a la **Coalición “Juntos Por Ti”**, las sanciones siguientes:

(...)

b) 25 Faltas de carácter sustancial: Conclusiones 7, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 45, 46, 58, 59, 60, 61, 67, 71, 72, 73, 75 y 76.

(...)

Conclusión 20

Partido Acción Nacional

Una reducción del **50%** (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$266,192.05 (Doscientos sesenta y seis mil ciento noventa y dos pesos 05/100 M.N.)**.

Partido de la Revolución Democrática

Una reducción del **50%** (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$231,568.11 (Doscientos treinta y un mil quinientos sesenta y ocho pesos 11/100 M.N.)**.

Partido del Trabajo

Una reducción del **50%** (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$126,452.68 (Ciento veintiséis mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 68/100 M.N.)**.

Partido de la Revolución Socialista

Una **Amonestación Pública**.

(...)

Conclusión 24

Partido Acción Nacional

Una reducción del **50%** (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$315,998.07 (Trescientos quince mil novecientos noventa y ocho pesos 07/100 M.N.)**.

Partido de la Revolución Democrática

Una reducción del **50%** (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la

cantidad de **\$274,895.79 (Doscientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y cinco pesos 79/100 M.N.).**

Partido del Trabajo

Una reducción del **50%** (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$150,112.68 (Ciento cincuenta mil ciento doce pesos 68/100 M.N.).**

Partido de la Revolución Socialista

Una **Amonestación Pública.**

(...)”

En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

A C U E R D A

PRIMERO. Se modifica la parte conducente el Dictamen Consolidado **INE/CG299/2017** y la Resolución **INE/CG300/2017**, aprobados en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio de dos mil diecisiete, derivado de la revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los Candidatos a los cargos de Gobernador, Diputado Local y Ayuntamiento correspondientes al Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit, por lo que hace a la Coalición “Juntos Por Ti”, respecto de las **conclusiones 20 y 24**, en los términos precisados en los Considerandos **4, 5, 6, 7, 8 y 9** del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Infórmese a la **Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el

expediente SUP-RAP-196/2017 y su acumulado, remitiéndole para ello copias certificadas de las constancias atinentes.

TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, por su conducto, remita el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de notificar a los sujetos interesados a la brevedad posible; por lo que se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado.

CUARTO. Hágase del conocimiento del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, a efecto de que las multas determinadas en el presente Acuerdo sean pagadas en dicho Organismo Público Local, la cual se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya quedado firme. En términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas en este Acuerdo, serán destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables.

QUINTO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de las sanciones impuestas en el presente Acuerdo.

SEXTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral, el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1270/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA QUINTA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL ELECTORAL, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE ST-RAP-27/2017, INTERPUESTO POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN CONTRA DEL DICTAMEN CONSOLIDADO Y DE LA RESOLUCIÓN IDENTIFICADOS CON LOS NÚMEROS INE/CG515/2017 E INE/CG516/2017 RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS MIL DIECISÉIS

ANTECEDENTES

I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. El veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión ordinaria la Resolución respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado **INE/CG515/2017**, los informes anuales de ingresos y gastos del Partido Acción Nacional, correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis, en el estado de Colima, así como la Resolución identificada como **INE/CG516/2017**.

II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución referida, el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, la C. Joanna Alejandra Felipe Torres en su carácter de representante suplente ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral del Partido Acción Nacional interpuso el recurso de apelación para controvertir la parte conducente del Acuerdo **INE/CG515/2017** y la Resolución **INE/CG516/2017**, mismo que resulto radicado en la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el número de expediente identificado con la clave alfanumérica **ST-RAP-27/2017**, para los efectos legales correspondientes.

III. Sentencia Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Toluca resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el once de enero del dos mil dieciocho, determinando en el Punto Resolutivo **PRIMERO**, lo que a continuación se transcribe:

“(…)

PRIMERO. *Se REVOCA PARCIALMENTE el Dictamen Consolidado y la resolución contenidas en los acuerdos número INE/CG515/2017 e INE/CG516/2017, aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, únicamente en lo tocante a la conclusión 8-A del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Colima, en relación a la porción considerativa contenida en el capítulo 18.2.9 en su inciso j), y el Punto Resolutivo Décimo en su inciso j), por las razones que se exponen en el Considerando Tercero de esta sentencia.*

(…)”

IV. Derivado de lo anterior, la ejecutoria recaída al recurso de apelación ST-RAP-27/2017, tuvo por efecto revocar parcialmente la resolución INE/CG516/2017, exclusivamente en relación a la conclusión 8-A del considerando 18.2.9 en su inciso j) y el Punto Resolutivo Décimo en su inciso j) de la Resolución INE/CG516/2017, y la parte conducente del Dictamen INE/CG515/2017, por esta vía se acata e interviene para los efectos ordenados por la Sala Regional Toluca, por lo que con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables, en consecuencia la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de mérito.

C O N S I D E R A N D O

1. Competencia. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44, numeral 1, incisos j); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas

correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos.

2. Determinación del órgano jurisdiccional. Que el cuatro de enero de dos mil dieciocho, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar parcialmente el Dictamen **INE/CG515/2017**, , exclusivamente en relación a la conclusión 8-A del considerando 18.2.9 en su inciso j) y el Punto Resolutivo Décimo en su inciso j) de la Resolución INE/CG516/2017, y la parte conducente del Dictamen INE/CG515/2017 ambos emitidos por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de su partido, correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis, por lo que se procede a la modificación del documento, para los efectos precisados en el presente Acuerdo.

A fin de dar cumplimiento al mismo, se procederá a modificar el Dictamen Consolidado y la Resolución de mérito, observando a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria.

3. Alcances del cumplimiento. Que por lo anterior y en razón del Considerando TERCERO de la Sentencia recaída al Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica **ST-RAP-27/2017**, relativo al **estudio de fondo y efectos**, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó lo que a continuación se transcribe:

“(…)

TERCERO. Estudio de fondo. *El Partido Acción Nacional hace valer agravios para controvertir la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relacionada con la revisión de informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos correspondientes a dos mil dieciséis, en lo que aquí interesa, respecto de las entidades federativas de Colima y Michoacán de Ocampo.*

Cuestión previa y metodología. *De la lectura del escrito de demanda, se aprecia que el apelante únicamente se encuentra controvertiendo la sanción y las consideraciones que dieron sustento a las conclusiones 8A, por lo que hace a Colima y Michoacán de Ocampo.*

En ese orden de ideas, ante la falta de impugnación, se debe considerar que el partido apelante se encuentra conforme con las consideraciones vertidas por la

responsable respecto de las conclusiones sancionatorias restantes respecto de las faltas de carácter formal (conclusiones 3, 6, 6A, 13, 14 y 15) como de las faltas de carácter sustancial o de fondo (conclusiones 4, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 21, 22, 23 y 24) respecto de Colima, ... y, en consecuencia, se deben dejar intocadas las imposiciones de las sanciones restantes relativas a las precitadas conclusiones, por lo que no se formulará mayor consideración al respecto de éstas.

Precisado lo anterior, resulta pertinente señalar que, por razón de método, esta Sala Regional se evocará al análisis de los agravios expresados por el apelante en dos apartados, cada uno referido a la entidad federativa correspondiente.

En un primer apartado, se analizará lo relativo a la conclusión 8-A relativa a Colima y...

Precisado lo anterior, se analiza el fondo de las cuestiones planteadas.

i. Colima. Conclusión 8-A relativa al rebase del límite de aportaciones por concepto de militantes, respectivamente.

Violación al derecho fundamental de audiencia. *El enjuiciante alega que la autoridad responsable en la revisión de los ingresos y egresos del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Colima solo observó la omisión de presentar la copia o la transferencia bancaria de las aportaciones, pero que en ningún momento se observó que las aportaciones hechas por los militantes rebasaran el límite de aportaciones establecidas en el artículo 56, numeral 2, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos.*

Tal circunstancia argumenta se tradujo en una violación al derecho de audiencia y defensa, porque no habérsele dado a conocer, con lo que se incumplió con las formalidades esenciales del procedimiento, al impedirse al partido político ofrecer pruebas y alegatos, pues en el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y contables no se hizo de su conocimiento tal observación.

El partido recurrente señala que en la conclusión 8 sólo se observó la omisión de presentar la copia o transferencia bancaria de las aportaciones, pero la conclusión derivada 8-A relativa al rebase del límite de aportaciones por concepto de militantes no le fue dada a conocer, pues afirma que en el oficio respectivo no se hizo referencia alguna a esa posible irregularidad, ya que en éste se señaló "adicionalmente una vez realizadas las reclasificaciones y ajustes derivado de los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad".

*En concepto de esta Sala Regional, el motivo de agravio planteado por el Partido Acción Nacional es **fundado**, puesto que durante la fase de desarrollo y revisión de los informes contables la autoridad responsable al constatar la observación 8-A derivada de la conclusión 8 relativa al rebase del límite de aportaciones por concepto de militantes, previo a finalizar su Dictamen consolidado debió garantizar al partido su derecho de audiencia a efecto de éste estuviera en aptitud de hacer valer lo que a su derecho conviniera, respecto a la constatación de la conclusión derivada, lo que no aconteció.*

En tal virtud, en principio debe realizarse un análisis de los alcances del derecho fundamental de audiencia para evidenciar que la autoridad responsable en el ejercicio de su atribución fiscalizadora de los gastos de los partidos políticos generó una conculcación al precitado derecho en perjuicio del Partido Acción Nacional que, a la postre, dio origen a que éste no estuviese en aptitud de manifestar lo que a su derecho conviniera y particularmente a que alegara y ofreciera las pruebas que estimara pertinentes.

a. Derecho fundamental de audiencia.

(...)

b. Violación al derecho fundamental de audiencia en el caso concreto.

El Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, prevé los procedimientos de errores y omisiones para que el sujeto fiscalizado esté en oportunidad de realizar las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes, garantizando el derecho fundamental de audiencia del ente fiscalizado, como se evidencia a continuación.

(...)

Como se advierte el Reglamento de Fiscalización prevé el procedimiento del primer oficio de errores u omisiones técnicas para que el ente fiscalizado esté en aptitud de presentar la documentación correspondiente y realice las aclaraciones pertinentes respecto de las inconsistencias e irregularidades que la autoridad administrativa electoral pueda advertir y le haga de su conocimiento en dicha comunicación administrativa, mientras que el segundo oficio de errores y omisiones tiene por propósito que una vez que el fiscalizado desahoga la primera notificación, la Unidad Técnica le comunique si las aclaraciones o rectificaciones hechas subsanan o no los errores u omisiones encontrados, otorgándole un último plazo improrrogable para que las subsane, con lo que da sustancia al derecho fundamental de audiencia dentro del procedimiento de fiscalización.

En tal sentido, ambos procedimientos suponen que las observaciones de errores u omisiones sobre los que versan los plazos otorgados al fiscalizado para que realice aclaraciones y rectificaciones siempre versaran sobre la misma materia, esto es, las presuntas irregularidades advertidas y notificadas en el primer oficio de errores u omisiones.

Sin embargo —tal y como aquí acontece—, puede suceder que posterior a las notificaciones del primero o segundo oficios de errores u omisiones, la autoridad administrativa electoral advierta inconsistencias e irregularidades que no se encuentren contenidas dentro de la materia de éstos, por ser éstas de una naturaleza jurídica o contable distinta, en cuyo caso, el Reglamento de Fiscalización no prevé ni regula el procedimiento a seguir para este tipo de casos y tampoco prevé mecanismos que garanticen el derecho fundamental de audiencia para estos supuestos.

No obstante lo anterior, conforme con lo expuesto en el marco doctrinal antes desarrollado, tal insuficiencia del procedimiento reglamentario no justifica ni hace permisible jurídicamente, que la autoridad administrativa electoral en su actuar fiscalizador al advertir presuntas irregularidades o inconsistencias distintas a las notificadas en el primero o segundo oficios de errores u omisiones finque conclusiones de posibles conductas infractoras sin cursar por las prevenciones y oportunidades establecidas para los procedimientos del primero y segundo oficios, pues hacerlo así supone no garantizar los elementos mínimos del derecho fundamental de audiencia, particularmente al no darle la oportunidad al ente fiscalizado de conocer los errores u omisiones detectados y la oportunidad de realizar las aclaraciones y rectificaciones pertinentes, así como presentar la documentación contable y jurídica necesaria a fin de subsanar éstas —darle la oportunidad para que manifieste, alegue y ofrezca las pruebas que conforme a su derecho mejor le convenga—.

En el caso, lo fundado del agravio radica en que de la revisión de los oficios de errores u omisiones no se desprende dato alguno que permitiera al ente fiscalizado conocer que una de las observaciones encontradas por la autoridad administrativa electoral era la consistente en rebasar el límite establecido para aportaciones por concepto de militantes, pues como éste lo afirma, tanto del primero como del segundo oficios de errores u omisiones solo se desprenden datos relativos a inconsistencias vinculadas con la omisión de presentar la copia o la transferencia bancaria de las aportaciones, circunstancias que sin duda impidieron que el partido político estuviera en aptitud de ejercer su derecho fundamental de audiencia en cuanto a realizar las alegaciones que estimara conducentes y aportar las pruebas correspondientes.

En efecto, de la revisión del oficio INE/UFT/DA-L/11204/17 relativo al primer oficio de errores u omisiones, no se advierte dato alguno relacionado con

presuntas inconsistencias derivadas de un presunto rebase en el límite de aportaciones por concepto de militantes, como se aprecia a continuación.

(...)

En idénticos términos, de la revisión del oficio número INE/UFT/DA-L/13035/17, que corresponde a la segunda vuelta de errores u omisiones tampoco se desprende dato alguno del cual el ente fiscalizado pudiera enterarse que entre las inconsistencias advertidas por la autoridad administrativa electoral se encontraba la relativa al rebase del límite de aportaciones por concepto de militantes, lo que a continuación se puede apreciar.

(...)

Las precitadas pruebas documentales públicas son de entidad probatoria plena y suficiente para demostrar que la autoridad administrativa electoral en ejercicio de su facultad fiscalizadora al notificar los oficios de errores y omisiones primera y segunda vuelta respecto de los gastos de financiamiento público ordinario del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Colima del año 2016, sus observaciones se encontraron dirigidas a inconsistencias relativas a que en la cuenta "Aportaciones de Militantes", subcuenta "En efectivo" observó el registro de pólizas que carecían de la totalidad del soporte documental, la omisión de la presentación de la ficha de depósito, del cheque o de la transferencia bancaria (primera vuelta), así como que se acompañó la documentación soporte, pero que no se cumplió en su totalidad por lo que no se subsanó la observación, no se presentó la copia del cheque o de la transferencia bancaria de las aportaciones (segunda vuelta); análisis probatorio que se realiza en términos de lo dispuesto por el artículo 16, párrafos 1 y 2, en relación al diverso numeral 14, párrafos 1, inciso b), y 4, inciso b), ambos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En tales condiciones, esta Sala Regional arriba a la conclusión que la autoridad responsable al formular los procedimientos de observación de primera y segunda vuelta no formuló señalamiento alguno en tomo a un posible rebase del límite de aportaciones por el concepto de militantes, lo que se tradujo en una vulneración al derecho fundamental de audiencia del partido recurrente, en tanto que éste se encontró imposibilitado material y jurídicamente de presentar sus aclaraciones y rectificaciones, así como de alegar y aportar las pruebas que a su derecho estimara convenientes a fin de regularizar tal situación, de ahí lo fundado del agravio planteado.

Apoyan y orientan el criterio sustentado, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia y tesis aislada con claves de identificación 2a/J.18/2011 y VIII.3o.81 A, con números de registro 161193 y 169664, de la Segunda Sala de

la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de Tribunales Colegiados de Circuito, respectivamente, de la Novena Época, en Materia Administrativa, del tenor siguiente:

(...)

En consecuencia, lo procedente será REVOCAR PARCIALMENTE, únicamente por lo que hace a la conclusión 8-A relativa a la fiscalización del ejercicio del financiamiento público ordinario del Comité Directivo del Partido Acción Nacional en el Estado de Colima del año 2016, en su porción considerativa en el capítulo 18.2.9 en su inciso j), así como en el Punto Resolutivo Décimo en su inciso j), para los efectos devolutivos que se precisarán en el considerando subsecuente.

(...)

CUARTO. Efectos de la sentencia. *Al haber resultado fundado el agravio planteado por el partido recurrente respecto de la conculcación al derecho fundamental de audiencia respecto de la conclusión 8-A relativa a la fiscalización del ejercicio del financiamiento público ordinario del Comité Directivo del Partido Acción Nacional en el Estado de Colima del año 2016, en cuanto al presunto rebase el límite de aportaciones por concepto de militantes en el rubro de financiamiento privado, lo procedente es fijar los efectos de los resuelto.*

En tal sentido, lo procedente es ordenar al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que por su conducto gire instrucciones a la Unidad Técnica de Fiscalización a fin de que reponga el procedimiento de fiscalización del ejercicio de gastos del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Colima, respecto del período 2016, únicamente por lo que hace a la conclusión 8-A en relación a lo decidido en el Dictamen Consolidado y la resolución correspondiente contenidas en los acuerdos números INE/CG515/2017 e INE/CG516/2017 por lo que hace a su porción considerativa en el capítulo 18.2.9 en su inciso j), así como en el Punto Resolutivo Décimo en su inciso j), para el efecto de que:

i. Otorgue la prevención que a manera de garantía de audiencia se encuentra prevista en el artículo 291, párrafo 1, del Reglamento de Fiscalización, a fin de que el partido recurrente presente la documentación necesaria o realice las aclaraciones o rectificaciones que a su derecho convengan respecto de la observación formulada por el posible rebase del límite de aportaciones por concepto de militantes en el rubro de financiamiento privado.

Y en caso, de que otorgada dicha garantía persista la observación que dio lugar a la conclusión 8-A, deberá de:

ii. De ser el caso, otorgar la prevención que a manera de garantía de audiencia se encuentra prevista en el artículo 294, párrafo 1, del Reglamento de Fiscalización, a fin de que subsane los errores u omisiones subsistentes respecto de la observación formulada por el posible rebase del límite de aportaciones por concepto de militantes en el rubro de financiamiento privado.

...

...

*Finalmente, deberán **mantenerse intocadas y quedar subsistentes** el resto de consideraciones, conclusiones y resolutivos contenidos en el Dictamen Consolidado y la resolución contenidos en los acuerdos números INE/CG515/2017 e INE/CG516/2017, aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por lo que hace a los puntos que aquí fueron objeto de controversia y que no fueron materia de revocación o modificación alguna, así como aquellos que no fueron materia del litigio.*

(...)”

4. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso del Recurso de Apelación identificado en el antecedente II del presente Acuerdo.

5. Alcances de la revocación. Que en tanto la Sala Regional Toluca dejó intocadas las demás consideraciones que sustentan el Dictamen **INE/C515/2017** y la Resolución identificada como **INE/CG516/2017**, este Consejo General únicamente se avocará al estudio y análisis de lo relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en el Considerando **18.2.9**, inciso **j)**, conclusión **8-A**, en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, materia del presente Acuerdo.

6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace a la conclusión **8-A** del Dictamen Consolidado correspondiente al Partido Acción Nacional, esta autoridad electoral emite una nueva determinación a efecto de valorar nuevamente toda la información y documentación presentada por el partido político.

En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la sentencia: b

Sentencia	Efectos	Acatamiento	Modificación
Revoca parcialmente el Dictamen y la Resolución impugnados, para los efectos precisados en la sentencia, siendo estos, dar la debida garantía de audiencia al recurrente.	Se revoca parcialmente la resolución impugnada respecto de la conclusión 8-A . (Para que se le otorgue de nueva cuenta el derecho de audiencia y defensa con un segundo oficio de errores y omisiones al recurrente).	Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficios núm. INE/UTF/DA/27969/18 y INE/UTF/DA/32977/18 notificado el 15 de mayo y 13 ed junio de 2018, respectivamente, se hicieron de su conocimiento las omisiones y errores que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF.	En el Dictamen Consolidado y Resolución. Conclusión 8-A .

Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Consejo General modifica el **Dictamen Consolidado** número INE/CG515/2017, así como la Resolución identificada con el número INE/CG516/2017, relativa a las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de su partido, correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis, en los términos siguientes:

A. Modificación al Dictamen Consolidado.

5.2.9 PAN Colima

Financiamiento Privado

Militantes

Efectivo

(...)

- ♦ *De la revisión a los recibos de aportaciones de Militantes en formato “RMEF” presentados por el sujeto obligado, se observó que omitió presentar la copia del cheque o la transferencia bancaria de las aportaciones por militante que rebasaron los 90 UMA que en el año 2016 equivalía a \$6,573.60 (73.04x90), los casos en comento se detallan la columna de “Referencia” marcados con “3” en el Anexo 1 del oficio núm. INE/UTF/DA-L/11204/17.*

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio núm. INE/UTF/DA-L/11204/17, notificado el 4 de julio de 2017, se hicieron de su conocimiento las omisiones y errores que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF.

Escrito de respuesta: OF-T-CDE-PAN 074/2017 de fecha 7 de julio de 2017, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Se presentan mediante el SIF en el apartado Módulo: Informe, Apartado: Documentación Adjunta al Informe, Tipo: Anual 2016, Etapa: Primer Ajuste, Clasificación: Evidencia a la retroalimentación del oficio de errores y omisiones, Oficio: INE/UTF/DA-L/11204/17, Observación: 11, se presentó el archivo denominado: 02_1A_INE-UTF-DA-L-11204-17_11_107.pdf, que consta de 30 fojas y que contiene: las pólizas que se integran en los archivos antes relacionados, se especifican en el Anexo 1 de su oficio de Errores y Omisiones al cual se le da respuesta, mismo que se adjuntó en el SIF en el Módulo: Informe, Apartado: Documentación Adjunta al Informe, Tipo: Anual 2016, Etapa: Primer Ajuste, Clasificación: Evidencia a la retroalimentación del oficio de errores y omisiones, Oficio: INE/UTF/DA-L/11204/17, Observación: 8, 9, 10 y 11 Archivo: 502_1A_INE-UTF-DA-L-11204-17_8-9-10-11_119.pdf, en el cual se le adicionaron 3 columnas denominadas “Póliza de cancelación, Soporte documental y Archivo” en las cuales se relacionan las evidencias, movimientos y en el archivo donde se adjuntó la documentación ahí relacionada.

De igual manera se subió dicha información en el Módulo: Operaciones, Apartado: Registro Contable, Tipo de póliza: Primer Ajuste, Número de pólizas: 137, Ejercicio: 2016, Tipo de póliza: Primer Ajuste, Subtipo de póliza: Diario y; en el Módulo: Informe, Apartado: Documentación Adjunta al Informe, Tipo: Anual 2016, Etapa: Primer Ajuste, Clasificación: Control de Folios Personalizado de Militantes, el archivo 502_1A_INE-UTF-DA-L-11204-17_3_95.xlsx que contiene: el Control de Folios Personalizado de Militantes CF-REMEF con 575 registros en formato de Excel debidamente corregido y, el archivo AUX C-RMEF Personalizado Militantes 2016.xlsx”

De la documentación presentada por el sujeto obligado en el SIF, se analizó el soporte documental, sin embargo, de los recibos de aportaciones observados inicialmente, los cuales superan los 90 UMA, no presenta la copia del cheque o la transferencia bancaria de las aportaciones, por tal razón la observación no quedó atendida. Los casos en comento se detallan en las columnas marcadas con “x” en el Anexo 1 del oficio núm. INE/UTF/DA-L/13035/17.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio núm. INE/UTF/DA-L/13035/17, notificado el 29 de agosto de 2017, se hicieron de su conocimiento las omisiones y errores que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF.

Escrito de respuesta: OF-T-CDE-PAN 189/2017 de fecha 5 de septiembre de 2017, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:

*“Con relación a esta observación, se presenta el archivo del **Anexo 1** de su oficio, al cual se le adicionaron tres columnas denominadas “Soporte documental”, “Nombre del archivo en evidencias de póliza” y “Nota complementaria”, en las cuales se describe la ubicación de las evidencias en las pólizas registradas en el SIF, los nombres de los archivos que contienen dichas evidencias y las notas que considero pertinentes para la localización de dicha evidencia documental, bajo el nombre de “502_2A_INE-UTF-DA-L-13035-17_3,4,5,6_17.xlsx”, mismo que se adjunta en el SIF de la contabilidad del Comité Directivo Estatal de Colima Recurso Local:*

- *Módulo: Informes*
- *Apartado: Documentación Adjunta al Informe*
- *Tipo: Anual 2016*
- *Etapa: Segundo Ajuste*

- *Clasificación: Evidencia de retroalimentación del oficio de errores y omisiones*
- *Oficio: INE/UTF/DA-L/13035/17*
- *Observación: 3,4,5,6"*

Del análisis a la documentación presentada por el sujeto obligado en el SIF, se determinó lo siguiente:

Por lo que respecta a los recibos identificados con (1) en la columna "Ref. 90" del Anexo 1 del presente Dictamen, se observó que omitió presentar el cheque o comprobante de transferencia bancaria, ya que rebasan el límite de 90 UMA (que en el año 2016 equivalía a \$6,573.60, 73.04x90), aun cuando presentó estados de cuenta bancarios o fichas de depósito que amparan el total de las aportaciones de los recibos, por tal razón la observación no quedó atendida.

En consecuencia, al omitir presentar la copia del cheque o la transferencia bancaria de 37 aportaciones que rebasaron los 90 UMA por \$686,933.26, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 96, numeral 3, inciso b), fracción VII del RF. **(Conclusión 8.PAN/CL)**

Adicionalmente, una vez realizadas las reclasificaciones y ajustes derivado de los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad, se verificó que el monto reportado por el sujeto obligado por concepto de aportaciones de militantes en dinero o en especie no hubiese rebasado el límite de las aportaciones establecido en el artículo 56, numeral 2, inciso a) de la LGPP en relación con el artículo 67, numeral 1, del Código Electoral del Estado de Colima, como se muestra a continuación:

Importe que el Partido reportó por concepto de aportaciones de Militante AI 31-12-2016	Límite de Financiamiento Privado Artículo 67, numeral 1, del Código Electoral del Estado de Colima	Rebase en el Límite de Aportaciones de Militantes
(a)	(b)	(c)= (a-b)
\$2,046,885.57	\$453,038.73	\$1,593,846.84

Tal como se aprecia, el sujeto obligado rebasó el límite de financiamiento de militantes que establece la normatividad; por tal razón, la observación no quedó atendida en lo que respecta a este punto. **(Conclusión 8-A.PAN/CL).**

No obstante, los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en pleno acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Regional del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación con sede en Toluca, al resolver el recurso de impugnación ST-RAP-27/2017, a garantizar el derecho de audiencia del Partido Acción Nacional en el estado de Colima, en relación con la conclusión 8-A del Dictamen correspondiente.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio núm. INE/UTF/DA/27969/18 notificado el 15 de mayo de 2018, se hicieron de su conocimiento las omisiones y errores que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF.

Escrito de respuesta: sin número, presentado el día 26 de mayo de 2018, en oficialía de partes de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en el Estado de Colima, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Para tal efecto se aclara lo siguiente:

El Partido Acción Nacional en el Estado de Colima, llevó a cabo procedimientos internos de elección del Consejo Estatal y Comité Directivo Estatal, para lo cual se emitieron sendas convocatorias de fecha 28 de septiembre de 2016 y 22 de octubre de 2016, respectivamente, las cuales desde este momento solicito se me tengan ofrecidas como pruebas en descargo. El objetivo de dichas convocatorias es hacer del conocimiento de los militantes la renovación de esos órganos a efecto de que si es de su interés participen en dichos procedimientos, siendo una obligación estatutaria estar al corriente de sus obligaciones partidistas, en especial las establecidas en el artículo 12 numeral 1 incisos d) y f) de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, lo cual lo demuestra el militante con una carta de salvedad de derechos emitida por el presidente o en su caso el Tesorero del Comité Directivo Estatal correspondiente.

En atención a esa obligación estatutaria y contenida además como requisito en las convocatorias señaladas, es evidente que muchos de los militantes interesados en participar pagaron cuotas que tenían pendientes de años anteriores, que hicieron solo por la obligatoriedad que impone la norma intrapartidista, mismas que no pueden sumarse como aportaciones del ejercicio fiscal auditado, puesto que en estricto sentido las aportaciones debieron hacerse antes, tan es así que en el ejercicio inmediato posterior el financiamiento privado fue de \$ 282,361.46 (doscientos ochenta y dos mil trescientos sesenta y un pesos 46/100 M.N.) ni siquiera se acerca a los límites estipulados por el artículo 56, numeral

2, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos y 67, numeral 1 del Código Electoral del Estado de Colima, que según el propio oficio que hoy se contesta es de \$453,038.73 (cuatrocientos cincuenta y tres mil treinta y ocho pesos 73/100 M.N.).

La exigencia del monto máximo de aportación privada se tiene que analizar a la luz de las normas que rigen la vida interna del Partido Acción Nacional y de las circunstancias particulares del caso, pues no se puede obligar al ente Partidista a la inaplicación de sus Lineamientos.”

Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el sujeto obligado se observó que, aun cuando manifiesta que las aportaciones rebasaron el límite establecido en la Ley, debido a que sus militantes liquidaron los adeudos de aportaciones que tenían pendientes de ejercicios anteriores, y que esta Unidad no debe pasar por alto las normas internas de los sujetos obligados, se le comunica que la normatividad es clara en señalar que las aportaciones que las aportaciones que reciban los militantes en un solo ejercicio no deben rebasar el límite establecido en el Reglamento de Fiscalización y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; por lo que el Instituto Político se encuentra obligado a vigilar que los importes del financiamiento privado se mantuvieran dentro de los límites legalmente establecidos razón por la que se consideró no atendida la irregularidad.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio núm. INE/UTF/DA/32977/18 de fecha 8 de junio de 2018, notificado al sujeto obligado el día 13 de junio de 2018, se hizo de su conocimiento las omisiones y errores que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF.

Escrito de respuesta: sin número de oficio, presentado el día 18 de junio de 2018 en oficialía de partes de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en el Estado de Colima, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Vengo por medio del presente ocuro a dar contestación y cumplimiento al oficio Núm. INE/UTF/DA/32977/18 de fecha 08 de junio de 2018 de conformidad con el artículo 294 numeral 1 de Reglamento de Fiscalización en los siguientes términos:

El Partido Acción Nacional en el Estado de Colima, llevó a cabo procedimientos internos de elección del Consejo Estatal y Comité Directivo Estatal, para lo cual se emitieron sendas convocatorias de fecha 28 de

septiembre de 2016 y 22 de octubre de 2016, respectivamente, las cuales desde este momento solicito se me tengan ofrecidas como pruebas en descargo. El objetivo de dichas convocatorias es hacer del conocimiento de los militantes la renovación de esos órganos a efecto de que si es de su interés participen en dichos procedimientos, siendo una obligación estatutaria estar al corriente de sus obligaciones partidistas, en especial las establecidas en el artículo 12 numeral 1 incisos d) y f) de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, lo cual lo demuestra el militante con una carta de salvedad de derechos emitida por el presidente o en su caso el Tesorero del Comité Directivo Estatal correspondiente.

En atención a esa obligación estatutaria y contenida además como requisito en las convocatorias señaladas, es evidente que muchos de los militantes interesados en participar pagaron cuotas que tenían pendientes de años anteriores, que hicieron solo por la obligatoriedad que impone la norma intrapartidista, mismas que no pueden sumarse como aportaciones del ejercicio fiscal auditado, puesto que en estricto sentido las aportaciones debieron hacerse antes, tan es así, que en el ejercicio inmediato posterior el financiamiento privado fue de \$ 282,361.46 (doscientos ochenta y dos mil trescientos sesenta y un pesos 46/100 M.N.) ni siquiera se acerca a los límites estipulados por el artículo 56, numeral 2, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos y 67, numeral 1 del Código Electoral del Estado de Colima, que según el propio oficio que hoy se contesta es de \$453,038.73 (cuatrocientos cincuenta y tres mil treinta y ocho pesos 73/100 M.N.).

La exigencia del monto máximo de aportación privada se tiene que analizar a la luz de las normas que rigen la vida interna del Partido Acción Nacional y de las circunstancias particulares del caso, pues no se puede obligar al ente Partidista a la inaplicación de sus Lineamientos.”

Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el sujeto obligado se observó que, aun cuando manifiesta que rebasaron el límite establecido en la Ley debido a que sus militantes liquidaron los adeudos de aportaciones que tenían pendientes de ejercicios anteriores, y que la autoridad electoral no debe pasar por alto la normatividad interna de cada partido, el incumplimiento a la normatividad persiste, ya que dichos recursos recibidos durante el ejercicio 2016, provenientes de aportaciones de militantes, rebasaron el límite establecido en la Ley electoral y se debe considerar que las normas internas de los partidos no pueden regular en contra de lo que establece la Legislación Electoral, particularmente los

artículos 56, numeral 2, inciso a) de la LGPP en relación con el artículo 67, numeral 1, del Código Electoral del Estado de Colima; asimismo, el Instituto Político se encuentra obligado a vigilar que los importes del financiamiento privado se mantuvieran dentro de los límites legalmente establecidos; por tal razón la observación **no quedó atendida por un importe de \$1,593,846.84. (Conclusión 8-A.PAN/CL).**.,

Modificaciones realizadas en acatamiento al ST-RAP-27/2017

Una vez valorada la legislación aplicable vigente a la expedición de dicha observación, de acuerdo a lo ordenado por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se confirma que el sujeto obligado rebasó el límite de aportaciones que por concepto de militantes debe recibir para el ejercicio 2016 al tenor de lo siguiente:

Importe que el Partido reportó por concepto de aportaciones de Militante Al 31-12-2016	Límite de Financiamiento Privado Artículo 67, numeral 1, del Código Electoral del Estado de Colima	Rebase en el Límite de Aportaciones de Militantes según Dictamen	Disminución Acatamiento ST-RAP27/2017	Importe determinado
(a)	(b)	(c)= (a-b)	(d)	(e)=(c-d)
\$2,046,885.57	\$453,038.73	\$1,593,846.84	0.00	\$1,593,846.84

Conclusiones de la revisión de Informe Anual 2016 de Partido Acción Nacional, en el estado de Colima.

En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la ejecutoria, identificada con el número de expediente ST-RAP-27/2017, la conclusión es la siguiente:

8-A.PAN/CL. El sujeto obligado rebasó el límite de aportaciones por concepto de militantes por un monto de \$1,593,846.84.

Tal situación incumple con lo dispuesto en los artículos 56, numeral 2, inciso a) de la LGPP, en relación con el artículo 67, numeral 1, del Código Electoral del Estado de Colima.

B. Modificación a la Resolución

(...)

Así, de conformidad con el Dictamen Consolidado, este Consejo General analizará en el orden descrito, cada uno de los Informes Anuales presentados por el partido en comento, en atención a cada uno de los Comités (Ejecutivo Nacional y Directivos Estatales), por apartados específicos, en los términos siguientes.

(...)

18.2.9 Comité Directivo Estatal Colima.

(...)

Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el instituto político, son las siguientes:

(...)

j) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: **Conclusión 8-A.**

(...)

j) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la conclusión infractora del artículo 56, numeral 2, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos: **conclusión 8-A.**

No.	Conclusión	Monto involucrado
8-A	"El sujeto obligado rebasó el límite de aportaciones por concepto de militantes por un monto de \$1,593,846.84."	\$1,593,846.84

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos toda vez que al advertir la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución, se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios referidos en el análisis de cada conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización

notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días hábiles, respectivamente, contados a partir del día siguiente de dicha notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes así como la documentación que subsanara la irregularidad detectada; sin embargo, en algunos casos las respuestas no fueron idóneas para subsanar las observaciones realizadas y, en otros, el instituto político fue omiso en dar respuesta a los requerimientos formulados.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera el artículo 56, numeral 2, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a)** Tipo de infracción (acción u omisión).
- b)** Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron.
- c)** Comisión intencional o culposa de la falta.
- d)** La trascendencia de las normas transgredidas.
- e)** Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f)** La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g)** La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el Considerando Décimo Tercero de la presente Resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción.

CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).

Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó que el sujeto obligado rebasó el límite permitido de aportación de militantes conforme al informe anual de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio 2016 como lo establece la normatividad electoral aplicable.

Por lo que hace a la conclusión referida, observada en el Dictamen Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el instituto político corresponde a una **acción**¹ consistente en exceder el límite máximo anual permitido respecto de las aportaciones de militantes.

b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron.

Modo: El instituto político cometió una irregularidad al exceder el límite anual de aportaciones de militantes que podía recibir durante el ejercicio 2016, por un monto de **\$1,593,846.84** (un millón quinientos noventa y tres mil ochocientos cuarenta y seis pesos 84/100M.N.).

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio 2016.

Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Colima.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del partido para obtener el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de violación alguna del citado partido para

¹ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003.

cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de la norma transgredida.

Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, y no únicamente su puesta en peligro.

Esto es, al actualizarse una falta sustancial por recibir aportaciones por concepto de financiamiento privado que exceden el límite establecido por la norma, se vulnera el principio de equidad que rige el sistema mixto de financiamiento de los partidos políticos, pues la Legislación Electoral establece una limitación al monto de los recursos privados en manos de los partidos políticos, al señalar que la ley debe **garantizar que el financiamiento público prevalezca**, con la finalidad de asegurar que el financiamiento privado no trastoque el equilibrio, cosa que podría ocurrir si no se pusiera un tope a las aportaciones privadas en su conjunto.

Aunado a lo anterior, al exceder el límite señalado el partido vulneró el principio de legalidad que rige su actuación pues, en términos de lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos tienen la obligación de conducir sus actividades dentro de los cauces legales, y ajustar su conducta a los principios del estado democrático, observar las disposiciones legales y reglamentarias en materia de financiamiento y gasto, esto es, en el caso concreto, no excederse en el límite establecido en la norma comicial.

Así las cosas, una falta sustancial trae consigo la vulneración a los principios ya apuntados, como consecuencia un financiamiento indebido, toda vez que derivado de su ilegal actuación, el instituto político se colocó en una situación de ventaja respecto de los demás partidos.

Cabe señalar que el régimen de financiamiento de los partidos políticos implica un conjunto de normas de carácter imperativo que condicionan la conducta que debe asumir el Estado y sus órganos, es este caso, el respetar los límites o prohibiciones en la materia.

Al efecto, es importante destacar que el artículo 41, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga la calidad de entidades de interés público a los partidos políticos. Asimismo, establece que dichos institutos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

Por su parte, la fracción II de la aludida disposición constitucional establece que la ley secundaria garantizará que los partidos políticos **cuenten de manera equitativa** con elementos para llevar a cabo sus actividades, por lo tanto, tienen derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social, de acuerdo con las formas y procedimientos que se establezcan en la ley, pero, además en la propia ley, se deben señalar las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, **debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado**.

En concordancia con lo expuesto, el artículo 23, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Partidos Políticos, establece como derecho de los partidos políticos, el recibir del financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Carta Magna.

En el artículo 51 del referido ordenamiento legal, en armonía con la fracción II del citado artículo 41 constitucional, se dispone que los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en la Ley de la materia, precisando los rubros o conceptos del mismo, y que evidencian el destino que debe dárseles, en los siguientes términos: para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, para gastos de campaña, y por actividades específicas como entidades de interés público.

Así las cosas, los partidos políticos están obligados a respetar el límite de aportaciones de militantes, pues la normatividad aplicable, a la letra establece:

Ley General de Partidos Políticos

“Artículo 56.

“(...

2. El financiamiento privado se ajustará a los siguientes límites anuales:

a) Para el caso de las aportaciones de militantes, el dos por ciento del financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas en el año de que se trate;

(...)"

En la especie, el partido se benefició con aportaciones que exceden el límite establecido para el ejercicio 2016, lo cual constituye per se, una violación a lo antes transcrito, por lo cual ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de la hipótesis normativa prevista en el artículo antes señalado.

Cabe señalar que, el actuar de los partidos políticos en cuanto al origen de su financiamiento, al ser entidades de interés público, se encuentran limitados a lo establecido específicamente en las disposiciones atinentes. En consecuencia, los sujetos obligados no pueden obtener beneficios al margen de lo previsto por el legislador, por lo que la autoridad electoral debe velar por que la totalidad de recursos que benefician a los partidos políticos se apeguen a lo dispuesto por la norma.

Por otra parte, los partidos políticos tienen la obligación de actuar siempre y en todos los casos de acuerdo a lo que prevé el constituyente permanente, el legislador federal y las autoridades electorales, cada una según su ámbito normativo-competencial, esto es, de acuerdo a los principios del Estado democrático, a saber: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.

Así, conforme al principio de legalidad, dado que la norma constitucional reconoce a los partidos políticos el carácter de entidades de interés público, sus fines y actividades no pueden resultar ajenos o diversos a los específicamente señalados por el legislador. Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al establecer un límite a las aportaciones que pueden recibir los partidos políticos, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento del régimen de partidos; en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Ahora bien, cabe señalar que los alcances de la norma analizada son de gran envergadura, puesto que no solo protege el sistema electoral existente, sino que, aunado a ello, representa una protección de los propios principios constitucionales que rigen al estado mexicano en cuanto a su forma de gobierno. Ello en virtud de que la prohibición de las aportaciones a que la disposición se refiere, no solo influye en la equidad respecto del sistema de financiamiento, sino que sustenta y refuerza las características y naturaleza de un modelo democrático de gobierno.

En este tenor, el artículo tiene como finalidad fortalecer la concepción democrática del Estado mexicano, reforzando el poder ciudadano como pilar principal en las decisiones políticas del país.

Así las cosas, en los términos previamente referidos la vulneración en comento, no implica únicamente la puesta en peligro o violación de los principios de equidad y legalidad, sino que conlleva a una lesión a las bases y principios constitucionales que definen las características de gobierno del Estado mexicano, situación que a todas luces es de mayor trascendencia.

En el caso concreto, ha quedado acreditado que el sujeto obligado, al exceder el límite anual de aportaciones de militantes que podía recibir durante el ejercicio 2016, cometió una irregularidad que debe ser sancionada.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta señalada, son los principios de equidad y la legalidad que rigen el sistema mixto de financiamiento, así como el actuar de los partidos políticos.

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto obligado se traduce en **una falta** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el partido incoado cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO** o de **FONDO**, transgrediendo lo dispuesto en el artículo 56, numeral 2, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta.

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y

atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida².

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el Considerando Décimo Tercero de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente caso se determine.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

Conclusión 8-A

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.

² Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

- Que el partido político conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe Anual.
- Que el sujeto obligado, no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$1,593,846.84 (un millón quinientos noventa y tres mil ochocientos cuarenta y seis pesos 84/100M.N.).
- Que se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.³

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

³ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave **SUP-RAP-114/2009** la finalidad que debe perseguir una sanción.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al **100% (cien por ciento)** sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a **\$1,593,846.84 (un millón quinientos noventa y tres mil ochocientos cuarenta y seis pesos 84/100M.N.)**.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al partido político es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 de la ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$1,593,846.84 (un millón quinientos noventa y tres mil ochocientos cuarenta y seis pesos 84/100M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

(...)

7. Que debe considerarse que el partido político cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con las sanciones que en su caso se les imponga, toda vez

que le fueron asignados recursos como financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2018.

Ahora bien, con motivo de la Reforma Política del año 2014 este Instituto Nacional Electoral es el órgano encargado de la fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos políticos en el ámbito federal y local. De tal suerte, los Partidos Políticos Nacionales con acreditación local y los partidos políticos locales sujetos al procedimiento de fiscalización, cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con las sanciones que, en su caso, fueran impuestas toda vez que les fueron asignados recursos a través de los distintos Organismos Públicos Locales Electorales, derivado del financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2018. Lo anterior, sin perjuicio del criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de apelación SUP-RAP-407/2016 en el sentido de considerar la capacidad económica a nivel nacional en caso de que los Partidos Políticos Nacionales con acreditación local no contaran con los recursos suficientes para afrontar las sanciones correspondientes.

Así, los montos de financiamiento tanto a nivel federal como local son los siguientes:

		Julio de 2018		
Partido Político Nacional	Financiamiento mensual (A)	Importe de las multas y sanciones (B)	Importe del reintegro del financiamiento local para gastos de campaña (C)	Importe de la ministración (C = A-B)
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	\$68,993,261.00	\$2,212,695.00	\$0.00	\$66,780,566.00
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL COLIMA	\$762,252.75	\$0.00	0.00	\$762,252.75
Total				\$67,542,818.75

Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza de que el partido político con financiamiento federal y local, tienen la capacidad económica suficiente con la cual puedan hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérsele en la presente Resolución.

En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político a nivel nacional, pues aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones

correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean establecidas conforme a la normatividad electoral.

Ahora bien, por lo que hace a la capacidad económica del partido político en aquellas entidades federativas en las que recibió financiamiento público estatal, con la finalidad de no afectar las actividades ordinarias del mismo, el pago de las sanciones económicas que en su caso se impongan con relación a las faltas sustanciales se realizará mediante la reducción de ministración mensual que reciba dicho ente político.

Es importante señalar que el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la determinación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) respecto del valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, el cual será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país⁴, mismo que para el ejercicio 2018, corresponde a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.).

Lo anterior de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

8. Que la sanción originalmente impuesta al Partido Acción Nacional, en la resolución INE/CG516/2017 consistió en:

Sanciones en Resolución INE/CG516/2017	Modificación	Sanciones en Acatamiento a ST-RAP-27/2017
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 18.2.9 correspondiente al Comité Directivo Estatal de Colima de la presente Resolución, se	Se confirma que el sujeto obligado rebasó el límite de aportaciones que por concepto de militantes debe recibir para el ejercicio.	TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 18.2.9 correspondiente al Comité Directivo Estatal de Colima de la presente Resolución, se

⁴ De conformidad con el Punto Resolutivo PRIMERO de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de 2016, publicada el pasado 18 de diciembre de 2015, "para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales (Delegaciones) del Distrito Federal."

Sanciones en Resolución INE/CG516/2017	Modificación	Sanciones en Acatamiento a ST-RAP-27/2017
<p>imponen al instituto político, la sanción siguiente:</p> <p>j) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 8A.</p> <p>Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$1,593,846.84 (un millón quinientos noventa y tres mil ochocientos cuarenta y seis pesos 84/100 M.N.).</p>		<p>imponen al instituto político, la sanción siguiente:</p> <p>j) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 8A.</p> <p>Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$1,593,846.84 (un millón quinientos noventa y tres mil ochocientos cuarenta y seis pesos 84/100 M.N.).</p>

9. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el presente Acuerdo, se confirma el Resolutivo **DÉCIMO, inciso j)** de la Resolución **INE/CG516/2017**; por tanto, se impone al **Partido Acción Nacional**, la sanción siguiente:

“R E S U E L V E

(...)

DÉCIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando **18.2.9** correspondiente al **Comité Directivo Estatal en Colima** de la presente Resolución, se imponen al instituto político, la sanción siguiente:

...

j) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: **Conclusión 8A.**

Una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$1,593,846.84 (un millón quinientos noventa y tres mil ochocientos cuarenta y seis pesos 84/100 M.N.).**”

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

A C U E R D A

PRIMERO. Se confirma la parte conducente del Dictamen Consolidado identificado con el número de Acuerdo **INE/CG515/2017** y la Resolución **INE/CG516/2017**, aprobados en sesión ordinaria celebrada el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, con respecto de las irregularidades encontradas de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del Partido Acción Nacional, correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis., en los términos precisados en los Considerandos **4, 5 y 6** del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Infórmese a la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **ST-RAP-27/2017**.

TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Organismo Público Local Electoral de Colima y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de notificar al Partido Acción Nacional; dentro de las **cuarenta y ocho horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo**; por lo que se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto y a la Sala Regional Toluca, las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes después de haberlas practicado.

CUARTO. En términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación los recursos que proceden en contra de la presente determinación son los denominados “recurso de apelación” y “juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano”, según sea el caso, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1271/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA REGIONAL XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN NÚMERO SX-RAP-26/2018

ANTECEDENTES

I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado **INE/CG195/2018** y la Resolución **INE/CG196/2018**, respecto a las irregularidades encontradas de la revisión de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención del apoyo ciudadano de las y los aspirantes a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Chiapas.

II. Recurso de apelación. Inconforme con lo anterior, el seis de abril del presente año, la C. Martha Verónica Gómez Gómez interpuso recurso de apelación para controvertir la parte conducente del Dictamen Consolidado **INE/CG195/2018** y la Resolución **INE/CG196/2018**, mismo que fue recibido por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal con sede en Xalapa, (en adelante, Sala Regional) el dieciséis del mismo mes y año, quedando registrado bajo el número de expediente **SX-RAP-26/2018**.

III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, en sesión pública celebrada el dieciséis de mayo del presente año, la Sala Regional resolvió el recurso referido, determinando lo que a la letra se transcribe:

*“ÚNICO. Se **revoca** el Dictamen Consolidado y la Resolución Impugnada, emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que fiscaliza a la Ciudadana Martha Verónica Gómez Gómez por las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de ingresos y gastos de*

precampaña a los cargos de Diputado Local y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017- 2018, en Chiapas, en lo relativo a la Conclusión 1, en los términos y para los efectos precisados en este fallo.”

IV. Derivado de lo anterior, en la ejecutoria antes citada la Sala Regional resolvió revocar el Dictamen Consolidado **INE/CG195/2018** y la Resolución **INE/CG196/2018**, por cuanto hace a la aspirante a candidata independiente al cargo de diputada local por el principio de mayoría relativa, la ciudadana Martha Verónica Gómez Gómez, a efecto que se realizará lo siguiente:

- Respecto de la conclusión 1, valorar los medios de prueba que la aspirante aportó para tratar de demostrar que el vehículo marca Chevrolet, modelo 2001, con placas de circulación DLM031A por la cantidad de \$25,000.00, le fue dado en comodato por una simpatizante por un periodo de veinticinco días.
- Asimismo, aclarar si los folios de identificación anexos al Dictamen corresponden a la aspirante, puesto que en el Dictamen Consolidado y en la Resolución emitida aparece como 3.4.13, mientras que en los anexos dicho folio corresponde a otra persona.

En ese sentido, considerando que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serán definitivas e inatacables, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de Acuerdo correspondiente.

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44 numeral 1, incisos aa) y jj); 426, numeral 1 y 427, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión

de los Informes de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Chiapas.

2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones emitidas por las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso la recaída al Recurso de Apelación identificado con el número de expediente **SX-RAP-26/2018**.

3 Que la Sala Regional resolvió revocar el Dictamen Consolidado **INE/CG195/2018** y la Resolución **INE/CG196/2018** emitidos por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto a la aspirante a candidata independiente al cargo de diputada local por el principio de mayoría relativa, la ciudadana Martha Verónica Gómez Gómez, por lo que esta autoridad procede a la modificación de dichos documentos, a fin de dar cumplimiento a los efectos precisados en la sentencia de mérito y atender a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria.

4. En ese sentido, en el Considerando TERCERO correspondiente al **ESTUDIO DE FONDO** de la ejecutoria dictada en el recurso de apelación identificado bajo el número de expediente **SX-RAP-26/2018**, la Sala Regional determinó lo que a continuación se transcribe:

“

...

*30. A juicio de este órgano jurisdiccional, los planteamientos de la actora suplidos en su deficiencia son sustancialmente **fundados**, y suficientes para revocar, en lo que fue materia de impugnación la resolución impugnada, por considerar que la autoridad incurrió en una falta de exhaustividad al omitir analizar la documentación que aportó la actora para demostrar que el vehículo que refiere la propia autoridad le fue dado en comodato.*

31. Además, porque los anexos del Dictamen Consolidado, por lo que hace a la actora, no corresponden en número consecutivo con los plasmados en el Dictamen y la resolución, ya que mientras en los anexos se le identifica con el consecutivo 3.4.14, en la resolución y Dictamen aparece con el consecutivo 3.4.13, como se muestra a continuación.

...

65. En ese sentido, a juicio de esta Sala Regional, la responsable debió motivar su determinación, a partir de señalar con precisión, las circunstancias, razones y causas que sustenten la emisión de su resolución.

66. Aspectos que, desde la óptica de esta Sala Regional, resultan suficientes para actualizar la falta de exhaustividad que alega el apelante.

67. Lo anterior, ya que no se está ante una omisión total de la actora, por lo que el INE debió, en atención al principio de exhaustividad, analizar los planteamientos y, en su caso, los documentos, y motivar su determinación, exponiendo las razones por las cuales, con los aludidos documentos, se tenían o no por atendidas las observaciones.

68. Máxime que el cúmulo de las mismas son resultado de la forma en que se atendió el oficio de errores y omisiones.

69. Lo anterior, porque al igual que las autoridades jurisdiccionales, las autoridades administrativas, cuyas resoluciones pueden ser impugnadas a través de un juicio o recurso, están obligadas a analizar todas y cada uno de las cuestiones o pretensiones realizadas, sometidas a su conocimiento, para darle certeza jurídica a la cadena de impugnación, y hacer un pronunciamiento en las consideraciones sobre los hechos constitutivos de la causa de pedir y sobre el valor de los medios de prueba aportados o allegados dentro del proceso, legalmente, como en el caso lo sería la respuesta al oficio de errores y omisiones, así como la valoración de los medios de prueba que fueron aportados al mismo, a través del propio SIF.

70. En ese sentido, a juicio de esta Sala Regional la resolución no fue exhaustiva en el análisis de las pruebas que fueron puestas a consideración de la responsable en el propio SIF, sin soslayar que al analizar la misma observación señaló por una parte que quedó atendida, y por otra parte que no, pero sin pronunciarse sobre el alcance demostrativo de las pruebas aportadas por la apelante.

71. En ese contexto, esta Sala Regional no pasa por alto en relación con la motivación, que los datos de identificación de los anexos I y II, del Dictamen Consolidado, no corresponden en cuanto al folio a que hace referencia la responsable, puesto que en el Dictamen Consolidado y la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aparece como 3.4.13, mientras que en los anexos referido aparece en el folio 3.4.14, en tanto que el folio 3.4.13 corresponde a otra persona.

72. De ahí que si bien lo descrito pudiera no afectar a los sujetos fiscalizados en cuanto a los hechos, o la materia de fiscalización, la responsable debe aclarar tal situación en relación con la actora, puesto que el diverso folio trata de otro sujeto obligado, en su calidad de aspirante a candidato independiente al cargo de diputado local por el principio de mayoría relativa, por el 2 Distrito de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

73. Sin que lo anterior libere en modo alguno a los sujetos obligados en materia de fiscalización.

74. Por tanto, al acreditarse la falta de exhaustividad en relación con los argumentos vertidos por el apelante en respuesta al oficio de errores y omisiones, así como la indebida motivación de la resolución, resulta fundado el motivo de agravio hecho valer.

*75. Por lo que el INE deberá proceder a realizar un nuevo pronunciamiento, en los términos que se indiquen en el considerando de efectos de la presente sentencia.
...*

5. Que, en coherencia al análisis desarrollado por el citado órgano jurisdiccional, dentro de la sentencia emitida en el expediente **SX-RAP-26/2018**, en el Considerando **CUARTO** relativo a los efectos de la sentencia, la Sala Regional determinó, lo que a la letra se transcribe:

“CUARTO. Efectos.

77. Por lo expuesto en el considerando previo, esta Sala Regional considera que con fundamento en el artículo 47, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral procede en derecho revocar el Dictamen Consolidado y la respectiva Resolución Impugnada en lo relativo a la Conclusión 1, respecto de la sanción impuesta a la Ciudadana Martha Verónica Gómez Gómez, por la omisión de no reportar la aportación de simpatizantes de un vehículo marca Chevrolet, modelo 2001, con placas de circulación DLM031A, por la cantidad de \$25,000.00, aspirante por la vía independiente al cargo de diputada local por el principio de mayoría relativa.

78. Lo anterior, en los términos y para los siguientes efectos:

a. Se revoca, en la parte conducente, la Conclusión 1, para el efecto de que la autoridad responsable en ejercicio de sus atribuciones valore los medios de prueba que la actora aportó para demostrar que el vehículo que reportó en el

SIF, le fue dado en comodato por una simpatizante por un periodo de veinticinco días, a fin de no tenerla por omisa en cuanto a reportar en el Sistema Integral de Fiscalización, la aportación de simpatizantes, de un vehículo, marca Chevrolet, modelo 2001, con placas de circulación DLM031A por la cantidad de \$25,000.00; en su calidad de aspirante por la vía independiente al cargo de diputada local por el principio de mayoría relativa.

b. Debiendo aclarar, si los folios de identificación anexos al Dictamen corresponden a la actora, puesto que en el Dictamen Consolidado y en la resolución emitida aparece como 3.4.13, mientras que en los anexos dicho folio corresponde a otra persona.

79. En tal sentido, se ordena al Consejo General del INE que emita una diversa resolución, tomando en cuenta lo expuesto en la parte considerativa de esta ejecutoria.

...

6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional.

Ahora bien, de la lectura del recurso de apelación identificado con el número de expediente como **SX-RAP-26/2018**, se desprende que, con relación al considerando 34.13, inciso a), conclusión 1, de la resolución **INE/CG196/2018**, la Sala Regional determinó que esta autoridad no fue exhaustiva al valorar los elementos de prueba proporcionados por la aspirante en comento, ordenando a este Consejo General emitir una nueva determinación en la que se valoren los elementos de convicción señalados; por lo que se procederá a acatar la sentencia referida, para lo cual se realizarán las siguientes modificaciones en congruencia con el sentido de la ejecutoria de mérito:

Conclusión 1	
Conclusión original	<i>"El sujeto obligado omitió reportar ingresos por un monto de \$25,000.00"</i>
Efectos	Esta autoridad valore los medios de prueba que la actora aportó en la conclusión referida, respecto a la aportación en especie de un automóvil por la cantidad de \$25,000.00, así como la aclaración respecto a los folios anexos al Dictamen que corresponden a la actora.
Acatamiento	Se procederá a analizar de nueva cuenta la documentación contenida en el Sistema Integral de Fiscalización relativa a la aportación en especie recibida por la recurrente por concepto de un automóvil, realizando la aclaración del folio que corresponde a la C. Martha Verónica Gómez Gómez, tanto en el Dictamen Consolidado, como en los anexos del mismo.

7. Modificación al Dictamen Consolidado INE/CG195/2018.

Por lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional, este Consejo General modifica el Dictamen Consolidado **INE/CG195/2018** relativo a la revisión de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención del apoyo ciudadano de las y los aspirantes a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Chiapas, por cuanto hace a la conclusión 1 de la aspirante a candidata independiente al cargo de diputada local por el principio de mayoría relativa, la ciudadana Martha Verónica Gómez Gómez, en los términos siguientes:

“(…)

DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN AL CONSEJO GENERAL DE INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIÓN DE APOYO CIUDADANO DE LAS Y LOS ASPIRANTES A LOS CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017 - 2018, EN EL ESTADO DE CHIAPAS.

(…)

3.4.13 Martha Verónica Gómez Gómez

Egresos

Gastos Operativos

Cons.	Observación Oficio: INE/UTF/DA/20967/18	Respuesta Escrito de respuesta sin número	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
3	Egresos Gastos Operativo Se observo una póliza de gastos por concepto de gasolina; sin embargo la aspirante no reporta ningun vehiculo:	<i>“Gastos operativos de la misma manera por los tiempos fue imposible enviarla, se anexa los</i>	No atendida De la revisión al SIF, se observó que presento recibo de aportación de simpatizantes	3.4.13.C1 El sujeto obligado omitió reportar ingresos por un monto de	Ingresos no reportado	Artículos 430, numeral 1 de la LGIPE y 96, numeral 1 del RF

Cons.	Observación Oficio: INE/UTF/DA/20967/18				Respuesta Escrito de respuesta sin número	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
	Consecutivo	Referencia contable	Descripción	Importe	datos que solicitaron"	en especie, el contrato de donación, el control de folios y la credencia para votar del simpatizante por tal razón esta observación quedó atendida. Sin embargo, del análisis a la documentación presentada se observó que expidió un recibo de aportación de simpatizantes el cual corresponde a un vehículo marca Chevrolet, Tipo Chevy, modelo 2001, con placas DLM031A por la cantidad de \$ 25,000.00 a nombre de Rubí Samayoa Arce (recibo número 02 del 18/01/18), así mismo, omitió registrar en el SIF el ingreso por esta aportación, por tal razón la observación no quedó atendida.	\$ 25,000.00		
	1	PN2/IIG-4/16-02-18	Aportación de simpatizantes en especie (combustible)	\$ 429.75					
	Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: En caso de que correspondan a aportaciones en especie; <ul style="list-style-type: none">El o los recibos de aportación con la totalidad de requisitos establecidos por la normativa.El o los contratos de donación o comodato debidamente requisitados y firmados.El control de folios que establece el RF.Dos cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios por cada aportación realizada.Evidencia de la credencial para votar de los aportantes.Las aclaraciones que a su derecho convenga. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 428, numeral 1, inciso e) y 376 numerales 1 y 2 de la LGIPE; 46, 105, 106, 107, numerales 1 y 3, 126, 127 y 251, numeral 2, inciso h) del RF.								

Ahora bien, en atención a las consideraciones y razonamientos hechos por la H. Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente identificado como SX-RAP-26/2018, respecto a la conclusión 1 de la aspirante a candidata independiente al cargo de diputada local por el Principio de Mayoría Relativa en el estado de Chiapas, la C. Martha Verónica

Gómez Gómez, consistente en la omisión de reportar la aportación de simpatizantes de un vehículo marca Chevrolet, modelo 2001, con placas de circulación DLM031A, por la cantidad de \$25,000.00, en pleno acatamiento a lo mandatado por la citada Sala Regional, esta autoridad procede a valorar los medios de prueba que la citada aspirante presento con respecto a la conclusión referida.

Al respecto, tal y como se señaló en párrafos anteriores, la aspirante a Candidata Independiente, en el informe correspondiente al periodo de obtención de apoyo ciudadano, realizó el registro de una aportación en especie por concepto de gasolina, sin embargo, no reportó vehículo alguno con el cual se comprobara el uso del combustible aportado; atendiendo a su derecho de audiencia, esta autoridad le solicitó las aclaraciones correspondientes mediante oficio INE/UTF/DA/20967/2018; como respuesta al citado oficio, la C. Martha Verónica Gómez Gómez, presentó la documentación consistente en el recibo de aportación de simpatizantes en especie, el contrato de donación, el control de folios y la credencial para votar del simpatizante, documentos soporte de la aportación del vehículo motivo de la observación.

No obstante a lo anterior, al valorar la documentación ya mencionada, se advirtió la omisión de registrar contablemente el ingreso consistente en la aportación de una simpatizante, relativa a un vehículo marca Chevrolet, Tipo Chevy, modelo 2001, con placas DLM031A por la cantidad de \$ 25,000.00 a nombre de Rubí Samayoa Arce (recibo número 02 del 18/01/18); lo anterior, ya que si bien presenta la documentación comprobatoria, dicho asiento contable no se realizó en la contabilidad del sujeto obligado; siendo que, el Reglamento de Fiscalización es claro al establecer que en“ el artículo 96 numeral 2 del citado reglamento señala que:

“Los ingresos se registrarán contablemente cuando se reciban, es decir, los que sean en efectivo cuando se realice el depósito en la cuenta bancaria o cuando se reciba el numerario, los que son en especie cuando se reciba el bien o la contraprestación”.

Ahora bien, por lo que hace al numeral 78 inciso b) de la ejecutoria que se acata, en el que se señala que no coincide la numeraria del Dictamen de la C. Martha Verónica Gómez Gómez contra los anexos I y II, esta Autoridad constato que los datos expuestos en dichos anexos corresponden a la aspirante a Candidata Independiente Martha Verónica Gómez Gómez, que si bien la numeración se

recorre, a razón de los aspirantes que fueron omisos en la presentación de su informe de ingresos y egresos, los datos señalados son los correctos.

En consecuencia, el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de una aportación en especie de un automóvil, por un monto de \$25,000.00, lo que Tal a juicio de la autoridad electoral un incumplimiento a lo establecido en el artículo 96, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.

8. Modificación a la Resolución INE/CG196/2018.

En cumplimiento con lo mandado por la Sala Regional se procede a modificar la Resolución **INE/CG196/2018**, respecto al considerando **34.13**, en lo tocante a la conclusión 1 de la aspirante a candidata independiente al cargo de Diputada Local, la ciudadana Martha Verónica Gómez Gómez, en los siguientes términos:

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIÓN DEL APOYO CIUDADANO DE LAS Y LOS ASPIRANTES A LOS CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, EN EL ESTADO DE CHIAPAS.

(...)

34.13 MARTHA VERÓNICA GÓMEZ GÓMEZ

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Chiapas, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió la **C. Martha Verónica Gómez Gómez** son las siguientes:

a) 1 Falta de carácter formal: Conclusión 1.

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: **Conclusión 2.**

c) Imposición de la sanción.

a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria de carácter formal, infractora del artículo **96, numeral 2, del RF: Conclusión 1.**

No.	Conclusión	Normatividad vulnerada
1	<i>“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de una aportación en especie de un automóvil, por un monto de \$25,000.00”</i>	Artículo 96, numeral 2 del RF.

Es importante señalar que la actualización de la falta formal no acredita una afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de los sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de recursos.⁸¹

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin embargo, la observación realizada no fue subsanada.

⁸¹ Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a)** Tipo de infracción (acción u omisión).
- b)** Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
- c)** Comisión intencional o culposa de las faltas.
- d)** La trascendencia de las normas transgredidas.
- e)** Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.
- f)** La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g)** La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).

En el cuadro siguiente en la columna identificada como **(1)** se señala la irregularidad cometida por el sujeto obligado, en la columna **(2)** se indica si se trata de una omisión o una acción y en la columna **(3)** la norma vulnerada.⁸²

Descripción de la irregularidad observada (1)	Acción u omisión (2)	Normatividad vulnerada (3)
Conclusión 1. El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de una aportación en especie de un automóvil, por un monto de \$25,000.00.	Omisión	Artículo 96, numeral 2 del RF.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.

El sujeto obligado infractor omitió **realizar el registro contable de una aportación en especie de un automóvil, por un monto de \$25,000.00**, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Chiapas, por lo que contravino lo dispuesto en el artículo **96, numeral 2 del RF**.

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Chiapas, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta

⁸² Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003.

referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Es importante señalar que con la actualización de la falta formal no se acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del ente político, sino únicamente su puesta en peligro.

Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del financiamiento de los sujetos obligados.⁸³

En la **conclusión 1** el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 96, numeral 2 del RF, el cual se tiene por reproducido como si a la letra se insertase.

De la valoración del artículo señalado se contemplan disposiciones cuya finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control contable de las operaciones que el sujeto obligado realice, es decir, los ingresos y egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello, por la autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar a cabo la función de la fiscalización.

La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y

⁸³ En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente:

*“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen una mera falta formal, **porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos**, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.*

*En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad **por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público**, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”*

aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que los sujetos obligados utilizan como parte de su financiamiento.

En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus egresos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.

En síntesis, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con sus egresos, consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus

informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.

Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus operaciones de forma clara.

Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia del artículo referido no se vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto a las actividades realizadas por el sujeto obligado, así como del origen, destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público o privado del sujeto infractor.

En consecuencia, el incumplimiento de la citada disposición, únicamente constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por parte del sujeto obligado, a través del Sistema Integral de Fiscalización, y exhibir toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente citado.

Esto es, se trata de una conducta e infracción la cual solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes políticos.

Así, es deber de los aspirantes informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los aspirantes a candidatos independientes, rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir

conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, derivada de la revisión del Informe de los ingresos y gastos del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera falta formal, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control en la rendición de cuentas.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto; y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por la conducta, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, por lo que la infracción expuesta en el apartado del análisis temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, consistentes en los errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de presentación de la totalidad de la documentación soporte de los ingresos y egresos del ente político infractor, no se acredita la vulneración o afectación al aludido bien jurídico protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora imputable al sujeto obligado, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el

bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de rendición de cuentas.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche, pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una **FALTA FORMAL**, que solamente configura un riesgo o puesta en peligro de un solo bien jurídico: el adecuado control de recursos, sin que exista una afectación directa.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta.

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **LEVE**.

Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el **inciso c)** del presente considerando.

(...)

c) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

Por lo que hace a las conclusiones 1 y 2.

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

a) Conclusión 1

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **LEVE**.
- Que con la actualización de la falta formal, no se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos referidos.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el reglamento de la materia.

- Que al tratarse de una falta existió singularidad en la conducta por el sujeto obligado.

b) Conclusión 2

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA** en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Chiapas, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad, el plazo de revisión del Informe de Obtención del Apoyo Ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Chiapas.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$1,429.00 (un mil cuatrocientos veintinueve pesos 00/100 M.N.)**.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas

dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁸⁴

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y Actualización, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el aspirante se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquella que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las circunstancias particulares del caso.

Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas.

Cabe señalar que, de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos precedentes. Considerando lo anterior, el monto a imponer serían los siguientes:

Inciso	Conclusión	Tipo de conducta	Monto Involucrado	Porcentaje de sanción	Monto de la sanción
a)	1	Forma	\$25,000.00	10 UMA	\$754.90
b)	2	Registro extemporáneo de operaciones del aspirante antes del primer oficio de errores y omisiones	\$1,429.00	3%	Sin efectos ⁸⁵
Total					\$754.90

⁸⁴ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; **II. Con multa de hasta cinco mil unidades de medida y actualización**, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato.

⁸⁵ Toda vez que el monto de la sanción resultaría menor a una Unidad de Medida y Actualización vigente para el dos mil diecisiete, la sanción queda sin efectos dado que su monto resulta de una importancia menor para el total de la sanción a imponer al sujeto infractor

Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.

Respecto de la capacidad económica de la aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades financieras, bancarias y fiscales.

En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra obligado a presentar la aspirante⁸⁶, se advirtió lo siguiente:

Ingresos (A)	Egresos (B)	Diferencia (A-B=C)	Capacidad Económica (30% de C)
\$144,000.00	\$52,000.00	\$92,000.00	\$27,600.00

Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por la aspirante de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección que debe tener el Estado para garantizar que la ciudadana pueda allegarse de los elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa.

⁸⁶ Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización.

Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un **techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado**, tal como lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes.

Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la situación económica.

Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos antes señalados para determinar la capacidad económica de la aspirante, este Consejo General concluye que la sanción a imponer a la **C. Martha Verónica Gómez Gómez** por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a **10 (diez)** Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de **\$754.90 (setecientos cincuenta y cuatro pesos 90/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

(...)

RESUELVE

(...)

DÉCIMO CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando **34.13** de la presente Resolución, se impone a la **C. Martha Verónica Gómez Gómez, en su carácter de aspirante a candidato independiente al cargo de Diputada Local**, la sanción siguiente:

- a) 1 Falta de carácter formal: **Conclusión 1.**
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: **Conclusión 2.**

Una **multa equivalente a 10 (diez)** Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo monto asciende a la cantidad de **\$754.90 (setecientos cincuenta y cuatro pesos 90/100 M.N).**

(...)

9. Que la sanción originalmente impuesta a la C. Martha Verónica Gómez Gómez, en el considerando **34.13** y resolutivo **DÉCIMO CUARTO** de la Resolución **INE/CG196/2018**, tuvo modificaciones que se reflejan de la siguiente manera:

Sanción en la Resolución INE/CG196/2018	Modificación	Sanción en Acatamiento a la sentencia SX-RAP-27/2018
<p>DÉCIMO CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 34.13 de la presente Resolución, se impone a la C. Martha Verónica Gómez Gómez, en su carácter de aspirante a candidato independiente al cargo de Diputada Local, la sanción siguiente:</p> <p>a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1. b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 2.</p> <p>Una multa equivalente a 365 (trescientos sesenta y cinco) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo monto asciende a la cantidad de \$27,553.85 (veintisiete mil quinientos cincuenta y tres pesos 85/100 M.N.).</p>	<p>De conformidad con lo resuelto en la resolución SX-RAP-26/2018, por lo que respecta a la conclusión 1, se determinó que la falta cometida por la C. Martha Verónica Gómez Gómez, en su carácter de aspirante a candidato independiente al cargo de Diputada Local, es de carácter formal, al omitir realizar el registro contable correspondiente.</p>	<p>DÉCIMO CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 34.13 de la presente Resolución, se impone a la C. Martha Verónica Gómez Gómez, en su carácter de aspirante a candidato independiente al cargo de Diputada Local, la sanción siguiente:</p> <p>a) 1 Falta de carácter formal: Conclusión 1. b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 2.</p> <p>Una multa equivalente a 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo monto asciende a la cantidad de \$754.90 (setecientos cincuenta y cuatro pesos 90/100 M.N).</p>

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

A C U E R D A

PRIMERO. Se modifica la parte conducente de la Resolución **INE/CG196/2018**, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, en los términos precisados en los Considerandos **7 y 8** del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral informe a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral Federal, con sede en Xalapa, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SX-RAP-26/2018**.

TERCERO. Notifíquese de manera personal el contenido del presente Acuerdo a la **C. Martha Verónica Gómez Gómez**.

CUARTO. En términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán efectivas a partir que el presente Acuerdo haya causado estado; y los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas en la presente determinación, serán destinados organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, en los términos de las disposiciones aplicables.

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1272/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL CON SEDE EN MONTERREY, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SM-RAP-52/2018

A N T E C E D E N T E S

I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado y la Resolución, identificados con los números **INE/CG219/2018** e **INE/CG220/2018** respectivamente, relativos a las irregularidades encontradas de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Querétaro.

II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el siete de abril de dos mil dieciocho, el **C. Pablo Tlacaelel Vázquez Ferruzca**, interpuso recurso de apelación para controvertir la parte conducente del Dictamen Consolidado y la Resolución, identificados con los números **INE/CG219/2018** e **INE/CG220/2018** respectivamente, radicado en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal con sede en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León (en adelante Sala Regional Monterrey), identificado con la clave alfanumérica **SM-RAP-52/2018**.

III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Monterrey resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, determinando en su Punto Resolutivo **PRIMERO**, lo que a continuación se transcribe:

*“**PRIMERO.** Se **modifica**, en lo que fue materia de impugnación, la Resolución controvertida, en los términos y para los efectos precisados en el presente fallo.”*

IV. Derivado de lo anterior, si bien es cierto la ejecutoria recaída al recurso de apelación SM-RAP-52/2018 tuvo por efecto **modificar** en lo que fue materia de impugnación **la Resolución INE/CG220/2018**, también lo es que el Dictamen Consolidado forma parte de la motivación de dicha Resolución que por esta vía se acata e interviene para los efectos ordenados por la Sala Regional Monterrey, por lo que se procede a la modificación de ambos documentos. Lo anterior, con fundamento en los artículos 425, numeral 1; 427, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y, toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables, en consecuencia, la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de mérito.

C O N S I D E R A N D O

1. Competencia. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 44, numeral 1, inciso aa); 425, numeral 1 y 427, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Querétaro.

2. Determinación del órgano jurisdiccional. Que el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, la Sala Regional Monterrey resolvió modificar la Resolución INE/CG220/2018, no obstante lo anterior, toda vez que el Dictamen Consolidado forma parte de la motivación de dicha Resolución se modifican ambas determinaciones, identificados con los números de Acuerdo **INE/CG219/2018** e **INE/CG220/2018**, respectivamente, emitidos por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en el sentido de modificar la conclusión 1, del Considerando 34.14, respecto al entonces aspirante a candidato independiente, C. Pablo Tlacaelel

Vázquez Ferruzca, se procede a la modificación de ambos documentos, para los efectos precisados en el presente Acuerdo.

A fin de dar cumplimiento al mismo, se procederá a modificar el Dictamen Consolidado y la Resolución referida, observando a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria.

3. Alcances del cumplimiento. Que por lo anterior y en razón de los considerandos **5 y 6** de la sentencia identificada con la clave alfanumérica SM-RAP-52/2018, relativos al **estudio de fondo y efectos**, la Sala Regional Monterrey, determinó lo que a continuación se transcribe:

“5. ESTUDIO DE FONDO Y CONCLUSIÓN

5.1 La autoridad responsable no tomó en cuenta la respuesta que dio el actor respecto a las dificultades para presentar oportunamente el informe de obtención de apoyos ciudadanos en el SIF.

En el caso que se resuelve, el INE impuso sanción al apelante al estimar la presentación extemporánea del informe de obtención de apoyo ciudadano, falta que calificó como grave ordinaria.

El recurrente manifiesta que la conclusión 1 del apartado 34.14 de la Resolución no reúne los principios de congruencia y exhaustividad pues el Consejo General de forma ilegal no tomó en consideración la respuesta que presentó respecto a los errores y omisiones relativos al informe de ingresos y gastos para la obtención de apoyos ciudadanos, pues no hubo acuerdo respectivo en el cual se le contestara dicha situación.

Es fundado el agravio del apelante.

(...)

Ahora, en cuanto al procedimiento de fiscalización, el actual diseño, en observancia al principio de legalidad y al derecho de audiencia, contempla, que previo a dictaminarse los informes presentados, en cada caso, la autoridad debe dar a conocer al sujeto fiscalizado la existencia de errores, omisiones o inconsistencias, a fin de que pueda hacer valer lo que a su derecho convenga, esto es, se brinda a favor de los partidos políticos, candidaturas, como también

a favor de aspirantes a candidaturas independientes, la posibilidad de solventar, aclarar o enmendar las inconsistencias, los errores o las omisiones que la autoridad hubiese identificado dentro del periodo para presentar dichos informes.

(...)

*El revisor permanente de lo que vía informe se reporte es la Unidad Técnica, al ser el órgano encargado de practicar auditorías sobre el manejo de los recursos, así como a cargo de quien está la **revisión** de la situación contable y financiera de los aspirantes a candidaturas independientes, respecto del origen y destino de los recursos y de los actos que se realicen para la obtención del apoyo ciudadano.*

(...)

Establecido el marco normativo y el marco de actuación que acorde a éste corresponde a la autoridad fiscalizadora y a los sujetos obligados, tenemos que, en el caso, se corrobora que al recurrente se le notificó el oficio de errores y omisiones el veinticinco de febrero¹, por tanto, de conformidad con el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción II, de la Ley de Partidos, el plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones pertinentes respecto del informe de errores y omisiones transcurrió del veinticinco de febrero al cuatro de marzo.

Asimismo, del anexo que allega la autoridad responsable se desprende que el recurrente presentó escrito de respuesta al oficio citado en el párrafo anterior el dos de marzo.

Por su parte, en el Dictamen respectivo, que a su vez motivó la resolución sancionatoria, la Comisión de Fiscalización señaló que el actor omitió presentar en tiempo el informe del período de obtención de apoyo ciudadano, falta que calificó como grave ordinaria, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado presentó de manera extemporánea su informe de obtención de apoyos ciudadano.

¹ Como se desprende de la cédula de notificación electrónica que obra en el anexo remitido por la autoridad responsable marcada con el inciso d).

Así se desprende de la parte conducente del referido Dictamen:

(...)

3.4 Dictamen consolidado respecto de la revisión de los informes de ingresos y gastos del periodo de obtención de apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatos independientes a los cargos de Diputado Local MR y Presidente Municipal en el estado de Querétaro.

Los aspirantes que presentaron su informe son los siguientes:

Cons.	Cargo	Nombre del aspirante	Fecha límite de presentación del Informe	Presentación de Informe		Fecha de desistimiento
				En tiempo 11-02-18	Extemporáneo 15-02-18	
3.4.16	Diputado Local	Pablo Tlacaelel Vazquez Ferruzca	11 de febrero 2018		✓	

(...)

Garantía de audiencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del RF, una vez que los sujetos obligados presentaron su informe de ingresos y egresos, derivado de la fiscalización realizada, la Unidad Técnica notificó lo oficios de errores y omisiones siguientes:

Cons.	Nombre del aspirante	Núm. de oficio de errores y omisiones	Folio de la notificación electrónica	Fecha de notificación
3.4.16	Pablo Tlacaelel Vázquez Ferruzca	INE/UTF/DA/21544/2018	18244	25/02/18

(...)

En la Resolución, se sostuvo:

(...)

Conclusión1.

No.	Conclusión
1	"3.4. 16C1. El sujeto obligado presentó fuera de tiempo el informe para el periodo de obtención de apoyo ciudadano, en ejercicio a la garantía de audiencia."

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, en la especie presentación extemporánea del informe de Obtención de Apoyo Ciudadano; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.

(...)'

Por otra parte, del anexo de la Resolución, en lo relativo al informe extemporáneo, se advierte lo siguiente:

(...)

Ahora, del anexo insertado, se advierte que efectivamente como lo señaló el recurrente, en su escrito que presentó el dos de marzo, hizo valer manifestaciones en tiempo y forma ante la autoridad fiscalizadora, respecto a que el informe de obtención de apoyo ciudadano lo presentó de manera extemporánea derivado a los problemas que tuvo al cargar la información requerida en el SIF.

Sin embargo, del referido anexo se desprende que la Unidad Técnica, sólo se limitó a señalar que de la revisión al SIF, se verificó que el sujeto obligado presentó el informe de apoyo ciudadano al cargo de diputado local de mayoría relativa; refiriendo que el cumplimiento se dio de manera extemporánea el quince de febrero, toda vez que la fecha de presentación del mismo feneció el

*pasado once de febrero; por tal razón concluyó que la observación **no quedó atendida**.*

(...)

Más no emitió pronunciamiento alguno respecto a las manifestaciones que realizó el recurrente, tendentes a los problemas que tuvo al cargar la información requerida en el SIF, a fin de presentar en tiempo el informe de obtención de apoyos ciudadanos, incumpliendo así con el principio de exhaustividad.

*En consecuencia, lo procedente es **modificar**, en lo que fue materia de impugnación, el Dictamen consolidado y la Resolución, en lo relativo a la **conclusión 1** del apartado 34.16, para el efecto de que el INE se pronuncie respecto a la manifestación que realizó el recurrente en su escrito de dos de marzo, mediante el cual informó que derivado a diversos problemas técnicos que presentó con el SIF, no le fue posible dar cumplimiento conforme al plazo establecido.*

(...)

6. EFECTOS

Conforme a lo expuesto, lo procedente es:

6.1. *Se **modifica**, en lo que fue materia de controversia, la Resolución impugnada, únicamente en cuanto a la conclusión 1 del apartado 34.14 de la misma.*

(...)

6.3. *Derivado de lo anterior, **se ordena al Consejo General del INE**, emita una nueva Resolución, en la que se pronuncie respecto a la manifestación que realizó el recurrente en su escrito de dos de marzo, por el cual informó que derivado a diversos problemas técnicos que presentó con el SIF, no le fue posible presentar el informe de obtención del apoyo ciudadano en el plazo establecido para ello.”*

4. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso el Recurso de Apelación identificado como **SM-RAP-52/2018**.

Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y reglas locales, prevaleciendo las Leyes Generales.

En función de lo anterior, al existir una temporalidad para recabar el apoyo ciudadano que comienza el ocho de enero de la presente anualidad y que culmina en el 6 de febrero del mismo año, se considerará para la imposición de las sanciones respectivas, el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA's) vigente a partir del uno de febrero de dos mil diecisiete y publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha diez de enero del dos mil diecisiete, mismo que asciende a \$75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.), lo anterior en virtud de que dicha actualización de medida durante el dos mil dieciocho ocurrió hasta el 1° de febrero de 2018.

Lo anterior de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo precedente establece *“A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.”*

En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de Medida y Actualización; por lo que, las multas impuestas en el presente Acuerdo, a las que les corresponde la aplicación del salario mínimo general vigente en el

entonces Distrito Federal para el ejercicio 2017, se ajustan al valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente en 2017.

5. Que en tanto la Sala Regional Monterrey dejó intocadas las demás consideraciones que sustentan el Dictamen Consolidado **INE/CG199/2018** y la Resolución identificada como **INE/CG220/2018**, este Consejo General únicamente se abocará al estudio y análisis de lo relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en el apartado **3.4.16, conclusión 1** del Dictamen Consolidado y el considerando **34.14, conclusión 1** de la respectiva Resolución, en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Regional Monterrey, materia del presente Acuerdo.

6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace a la **conclusión 1** del Dictamen Consolidado y de la Resolución correspondiente al **C. Pablo Tlacaelel Vázquez Ferruzca**, esta autoridad electoral emite una nueva determinación.

En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la sentencia:

Sentencia	Efectos	Acatamiento	Modificación
Modifica en lo que fue materia de impugnación el considerando 34.14, específicamente la conclusión 1	Se modifica la conclusión 1 del considerando 34.14.	Conclusión 1: Derivado del análisis realizado al escrito de dos de marzo presentado por el C. Pablo Tlacaelel Vázquez Ferruzca, se determinó que hubo incontinencias en el Sistema Integral de Fiscalización, por tal razón, la observación quedó sin efectos .	En el Dictamen y en la Resolución, se deja sin efectos la conclusión 1 .

Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Consejo General modifica el Dictamen Consolidado número **INE/CG219/2018**, así como la Resolución identificada con el número **INE/CG220/2018**, relativos a las irregularidades encontradas respecto a la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017- 2018, en el estado de Querétaro, en la parte conducente al **C. Pablo Tlacaelel Vázquez Ferruzca**, en los términos siguientes:

A. Modificación al Dictamen Consolidado.

“3.4.16 Pablo Tlacaelel Vázquez Ferruzca

(...)

ID	Observación	Respuesta	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
	Oficio: INE/UTF/DA/21544/ 2018	Escrito de respuesta, sin número de fecha 02 de marzo de 2018.				
1	<p>Informe Extemporáneo</p> <p>El sujeto obligado presentó de forma extemporánea el Informe de obtención del apoyo ciudadano.</p> <p>Se le solicita presentar mediante el SIF si así lo considera pertinente</p> <ul style="list-style-type: none"> Las aclaraciones que a su 	<p><i>“En cuanto a lo que se refiere a este punto se manifiesta que si bien es cierto el informe al cual se hace mención, fue presentado de manera extemporánea derivado a los problemas que se presentaron al cargar la información requerida en el sistema habilitado por parte del Instituto Nacional Electoral, problemas que se hicieron del conocimiento del área de soporte técnico de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral y el área técnica del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, llamadas las cuales</i></p>	<p>Sin efectos</p> <p>En acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Regional Monterrey, en la ejecutoria SM-RAP-52/2018, se determinó lo siguiente:</p> <p>De la revisión al SIF, se determinó que el sujeto obligado presentó escrito de respuesta en el que manifestó que, por problemas en el funcionamiento del SIF, no le fue posible presentar su informe en tiempo, y toda vez que esta autoridad verificó</p>	<p>Conclusión 1</p> <p>Sin efectos</p>		

ID	Observación	Respuesta	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
	Oficio: INE/UTF/DA/21544/ 2018	Escrito de respuesta, sin número de fecha 02 de marzo de 2018.				
	<p>derecho convengan.</p> <p>Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 380 numeral 1, inciso g) de la LEGIPE; 242 numeral 2, 250, numerales 1 y 2 del RF.</p>	<p><i>deben de encontrarse registradas en el historial del número 01 55 55 99 16 00 y al 01 55 55 99 16 00 de la dependencia en mención sobre las llamadas recibidas del número telefónico (044) 44 24 14 33 27 del cual se podrá verificar que en diversas ocasiones nos comunicamos solicitando apoyo técnico y haciendo saber el problemas presentados.</i></p> <p><i>Presento capturas de pantallas donde se muestran los problemas presentados durante donde se visualiza que en diversas ocasiones existieron problemas de acceso conforme se puede verificar a continuación:</i></p> <p><i>Sin embargo, el que suscribe en ningún momento se negó a presentar o dar a conocer la información requerida, pero derivado a los diversos problemas técnicos que presentaron el sistema en mención no fue posible dar cumplimiento conforme al plazo establecido”.</i></p>	que hubo contingencias en el sistema, por tal razón, la observación quedó sin efectos.			

B. Modificación a la Resolución.

Que la Sala Regional Monterrey, al haber dejado intocadas en la sentencia recaída al expediente **SM-RAP-52/2018** las demás consideraciones que sustentan la

Resolución **INE/CG220/2018** relativas al **C. Pablo Tlacaelel Vázquez Ferruzca**, este Consejo General únicamente se abocará a la modificación de la parte conducente del Considerando **34.14**, relativo a la conclusión **1**, en los términos siguientes:

“(…)

34.14 C. PABLO TLACAELEL VÁZQUEZ FERRUZCA.

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Querétaro, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el **C. PABLO TLACAELEL VÁZQUEZ FERRUZCA** son las siguientes:

a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 2. [La Sala Regional Monterrey dejó firme esta conclusión y su sanción]

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 3. [La Sala Regional Monterrey dejó firme esta conclusión y su sanción]

a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria infractora del artículo 143 Bis del Reglamento de Fiscalización: Conclusión 2.

(…)

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante **C. PABLO TLACAELEL VAZQUEZ FERRUZCA** es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una **Amonestación Pública**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria, infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización: **Conclusión 3**

(...)

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante **C. PABLO TLACAELEL VÁZQUEZ FERRUZCA** es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una **Amonestación Pública**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Electoral del Poder Judicial de la Federación.

7. Que la sanción originalmente impuesta al entonces aspirante a candidato independiente, **C. Pablo Tlacaelel Vázquez Ferruzca**, en la resolución **INE/CG/2020/2018**, consistió en:

Sanciones en resolución INE/CG301/2017	Modificación	Sanciones en Acatamiento a SG-RAP-193/2017
DÉCIMO QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 34.14 de la presente Resolución, se impone al C. PABLO TLACAELEL VÁZQUEZ FERRUZCA , en su carácter de aspirante a candidato independiente, las sanciones siguientes:	La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó declarar fundado el agravio vertido por la apelante, por lo que la sanción impuesta al C. PABLO TLACAELEL	DÉCIMO QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 34.14 de la presente Resolución, se impone al C. PABLO TLACAELEL VÁZQUEZ FERRUZCA , en su carácter de aspirante a

Sanciones en resolución INE/CG301/2017	Modificación	Sanciones en Acatamiento a SG-RAP-193/2017
<p>a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1</p> <p>Una multa equivalente a 152 (ciento cincuenta y dos) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de \$11,474.48 (once mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 48/100 M.N.).</p> <p>b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2.</p> <p>c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3.</p> <p>Una amonestación pública.</p>	<p>VÁZQUEZ FERRUZCA respecto de la conclusión 1, misma que quedó sin efectos.</p>	<p>candidato independiente, las sanciones siguientes:</p> <p>a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2.</p> <p>b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3.</p> <p>Una amonestación pública.</p>

8. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el presente Acuerdo, se impone al entonces aspirante a candidato independiente, **C. Pablo Tlacaelel Vázquez Ferruzca**, la siguiente sanción:

“R E S U E L V E

(...)

DÉCIMO QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 34.14 de la presente Resolución, se impone al **C. PABLO TLACAELEL VÁZQUEZ FERRUZCA**, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las sanciones siguientes:

a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: **conclusión 2.**

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: **conclusión 3.**

Una amonestación pública.

(...)”

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); 425, numeral 1 y 427, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

A C U E R D A

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado identificado **INE/CG219/2018** y la Resolución **INE/CG220/2018**, aprobados en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, respectivamente, relativos a las irregularidades encontradas respecto de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Querétaro.

SEGUNDO. Infórmese a la **Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SM-RAP-52/2018**.

TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Instituto Electoral del Estado de Querétaro para que dicho organismo esté en posibilidad de notificar al **C. Pablo Tlacaoel Vázquez Ferruzca**, dentro de las **cuarenta y ocho horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo**. Derivado de lo anterior, se solicita al Organismo Público Local remita a la Sala Regional Monterrey y a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes después de haberlas practicado.

CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1273/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO SUP-RAP-279/2018

A N T E C E D E N T E S

I. Aprobación de la Resolución. El seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión ordinaria el Dictamen Consolidado **INE/CG/1110/2018** y la Resolución, identificada con el número **INE/CG1111/2018**, que presentó la Comisión de Fiscalización del propio Instituto, respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Jefe de Gobierno, diputados locales y alcaldes, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la Ciudad de México.

II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el diez de agosto dos mil dieciocho, Fernando Garibay Palomino, representante suplente del Partido Verde Ecologista ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, interpuso recurso de apelación; el quince de agosto de dos mil dieciocho se turnó al Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a fin de controvertir la parte conducente del Dictamen y la Resolución, aludidos; mismo que se tuvo por recibido el expediente, integrándose bajo el número SUP-RAP-279/2018.

III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior, resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, determinando en su **ÚNICO** Punto Resolutivo, lo que se transcribe a continuación:

“ÚNICO. Revocar la Resolución y el Dictamen impugnados, en los términos y para los efectos precisados en esta sentencia.”

Derivado de lo anterior, en el recurso de apelación **SUP-RAP-279/2018**, se determinó:

- Revocar lisa y llanamente las conclusiones 5_C23_P2, al haberse acreditado la comprobación de la transferencia en especie, y 5_C25_P2 al no existir las consecuencias de hecho y de Derecho en el Dictamen Consolidado que originaron la conclusión sancionatoria.
- Revocar parcialmente para valorar la información proporcionada por el actor en el escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones, en lo referente a la Conclusión 5_C15_P3; individualizar la sanción a imponer en la conclusión 5_C7_P1, a partir del monto del monto involucrado de \$25,875.00; y ajustar el monto computado para efecto del rebase de topes, desarrollado en la conclusión 5_C46_P3 en el sentido de que cualquier ajuste que se realice debe tener como límite del monto involucrado \$309,840.10, conclusiones contenidas en el Considerando 33.5, así como el resolutive quinto incisos e) y h), relativo al Partido Verde Ecologista de México.

En ese sentido, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 370, 425, 426, 427, numeral 1, inciso a); 428, numeral 1, incisos c) y d); 430 y 431, numeral 3, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables; en consecuencia, la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de mérito.

C O N S I D E R A N D O

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, numeral 1, inciso a) y j); 190, numeral 1, 380, 370, 425, 426, 427, numeral 1, inciso a); 428, numeral 1, incisos c) y d); 430 y 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Jefe de Gobierno, diputados locales y alcaldes, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la Ciudad de México.

2. Que el cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Superior, resolvió revocar el Dictamen Consolidado **INE/CG/1110/2018** y la Resolución **INE/CG1111/2018**, de manera lisa y llana lo referente a las conclusiones 5_C23_P2 y 5_C25_P2; y parcialmente, lo relativo a las conclusiones 5_C15_P3 y 5_C7_P1 todas del Considerando 33.5 correspondiente al Partido Verde Ecologista de México, únicamente para los efectos precisados en la resolución SUP-RAP-279/2018, por lo que a fin de dar cumplimiento a la misma, se procederá a la modificación del Dictamen y la Resolución de mérito, observando a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria.

3. Que, en la sección relativa al estudio de fondo, dentro del Considerando CUARTO, el órgano jurisdiccional señaló que:

“(…)

4.1.5. Reporte de gastos

En este tema, el recurrente controvierte las determinaciones de la autoridad responsable consistentes en:

Conclusión	Conducta	Cuenta	Monto involucrado	Sanción
5_C10_P2	El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de espectacular	Jefatura de Gobierno	\$67,627.80	100% sobre el monto involucrado Una reducción del 25% de la ministración mensual, hasta alcanzar la cantidad de \$67,627.80 (sesenta y siete mil seiscientos veintisiete pesos 80/100 m.n.)
5_C19_P2	El sujeto obligado omitió reportar los gastos realizados por concepto de propaganda, por \$697,736.52	Concentrador a y otros ¹⁷	\$697,736.52	100% sobre el monto involucrado. Una reducción del 25% de la ministración mensual, hasta alcanzar la cantidad de \$697,736.52 (seiscientos noventa y siete mil setecientos treinta y seis pesos 52/100 m.n.)
5_C15_P3	El sujeto obligado omitió reportar los gastos realizados por concepto de propaganda, por \$93,958.00	Jefatura de Gobierno	\$93,958.00	100% sobre el monto involucrado Una reducción del 25% de la ministración mensual, hasta alcanzar la cantidad de \$93,958.00 (noventa y tres mil novecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 m.n.).

“(…)

Por otro lado, respecto de la conclusión 5_C15_P3, el actor considera que la autoridad fiscalizadora no menciona cuáles son los gastos que se están observando ni en los cuadros de conclusiones ni en el engrosé, lo que, en su consideración, le genera la imposibilidad de defenderse.

Al respecto, esta Sala Superior advierte que tal como refiere el actor, la autoridad fiscalizadora en el Dictamen Consolidado determinó que el partido político omitió el reportar gastos, y, en consecuencia, al aplicar la matriz de

¹⁷ Al respecto, el actor a fin de demostrar su pretensión presenta como pruebas diversas pólizas, identificándose algunas correspondientes a una cuenta concentradora. Ver, carpeta de pruebas 2, conclusión 5_C19_P2.

precios concluyó con que el monto involucrado ascendía a \$93,958.00 (noventa y tres mil novecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 m.n.).

Para ello, al momento analizar la respuesta al oficio de errores y omisiones, la autoridad fiscalizadora señaló que algunas de las observaciones sí habían sido ‘atendidas’, manifestando que ello se identificaba con la referencia ‘(1)’ del ‘anexo 2_p3’, siendo que las referencias ‘(2)’ se tenían como ‘no atendidas’¹⁸.

Sin embargo, tal como precisó el actor al consultar el Dictamen Consolidado o el anexo referido, no se identifica que la autoridad fiscalizadora haya identificado qué gastos continuaron sin subsanar a pesar de que el partido político presentó diversa información a fin de acreditar el reporte de los gastos monitoreados.¹⁹ Esta cuestión, se traduce en una indebida motivación.

Lo anterior, se evidencia al observar el contenido del ‘anexo 2_p3’ el cual consiste en el monitoreo de espectaculares y medios impresos que realiza la autoridad, y en el cual, las únicas ‘referencias’ que se incluyen corresponden a la localización de la propaganda observada.

En consecuencia, se determina que la conclusión 5_C15_P3 carece de una debida motivación por lo que se revoca para efectos de que la autoridad fiscalizadora, en ejercicio de sus facultades de verificación, valore la información proporcionada por el actor en el escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones y determine lo que corresponda.

(...)

4.1.6. Desproporcionalidad en las sanciones o indebida individualización

En este tema, el actor controvierte de forma general diversas sanciones, y de forma específica la conclusión siguiente:

Conclusión	Conducta	Cuenta	Monto involucrado	Sanción
5_C7_P1	El sujeto obligado omitió reportar gastos realizados por concepto de propaganda exhibida en vía pública distinta a espectaculares, por un monto de \$25.876.00	Jefatura de Gobierno	\$25.875.00	100% sobre el monto involucrado Una reducción del 25% de la ministración mensual, hasta alcanzar la cantidad de \$288,193.05 (doscientos ochenta y ocho mil ciento noventa y tres pesos 05/100 m.n.)

Respecto de la conclusión 5_C7_P1 transcrita, el actor plantea que la sanción es desproporcional, pues se determinó un monto involucrado de \$25,875.00

¹⁸ Ver dictamen consolidado, consecutivo 123, pág. 132.

¹⁹ Respuesta al oficio de errores y omisiones, respuesta del partido político identificada en el escrito PVEMCDMX/SF/50/2018 de fecha 15 de julio, observación 21. pág. 23.

(veinticinco mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 m.n.) y se impuso una sanción de \$288,193.05 (doscientos ochenta y ocho mil ciento noventa y tres pesos 05/100 m.n.), lo cual, en su consideración es excesivo pues es 11.13 veces más del monto determinado.

En efecto, en la conclusión sancionatoria la autoridad fiscalizadora identificó que un gasto en propaganda en la vía pública no fue reportado, en consecuencia, aplicó la matriz de precios y a la contabilidad de la candidata a jefa de gobierno le determinó un monto no reportado por \$25,875.00 00 (veinticinco mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 m.n.).²⁰

Sin embargo, en la resolución impugnada, el Consejo General al momento de imponer la sanción confundió los montos involucrados en la conclusión, ya que en un primer momento sintetizó las condiciones en la comisión de la infracción y determinó la cantidad referida, pero posteriormente, al imponer la sanción determinó la reducción de ministraciones mensuales por el 100% (cien por ciento) del monto involucrado, y en un lapsus calami refirió que éste correspondía a la cantidad de \$288,193.05 (doscientos ochenta y ocho mil ciento noventa y tres pesos 05/100 m.n.).²¹

*En consecuencia, resulta fundado el agravio del actor por lo que se revoca la imposición de la sanción con el fin de que la autoridad responsable considere que el monto involucrado es de \$25,875.00 00 (veinticinco mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 m.n.), y a partir de ello, determine la sanción idónea para cumplir con su función preventiva.
(...)*

4.1.7. Rebase de topes

Específicamente, respecto de la conclusión 5_C46__P32²², el actor plantea que no se realizó una adecuada individualización de la pena faltando a los principios de certeza y seguridad jurídica, aunado a que el monto involucrado debe actualizarse con motivo de que en el presente medio de impugnación se debe concluir que algunas de las irregularidades detectadas no se cometieron.

²⁰ Ver dictamen consolidado, consecutivo 20, pág. 22.

²¹ Ver resolución impugnada, apartado 33.5, inciso e), págs. 687 y 2487.

²² En el dictamen se identifica como "5-C46-P3" [guiones medios].

Al respecto, esta Sala Superior advierte que efectivamente la autoridad fiscalizadora en el Dictamen Consolidado concluyó que el partido político rebasó el tope de campaña establecido en una de sus candidatas por un monto de \$309,840.10 (trescientos nueve mil ochocientos cuarenta pesos 10/100 m.n.), remitiéndose al “ANEXO 11” a fin de observar el detalle.

Por tal motivo, en la resolución impugnada se impuso una sanción tomando como base el monto involucrado referido.²³

Sin embargo y para efectos de precisión, en el “ANEXO II” la única candidata que rebasó el tope de gastos fue la postulada como jefa de gobierno, siendo que atendiendo al propio desglose se concluyó un rebase de topes por \$609,840.10 (seiscientos nueve mil ochocientos cuarenta pesos 10/100 m.n.) y no por la cantidad que la autoridad fiscalizadora incluyó en el archivo de observaciones del Dictamen Consolidado y en la resolución impugnada.

No obstante, pese al error, esta Sala Superior realizará el estudio de la controversia considerando el monto involucrado determinado en el Dictamen Consolidado y en la resolución impugnada con apoyo en el principio non reformatio in peius. (...)

5. EFECTOS

Al haber resultado fundados los planteamientos del recurrente o haberse advertido una ausencia o indebida fundamentación y motivación en algunas de las conclusiones sancionatorias controvertidas, esta Sala Superior procede a fijar los efectos de la sentencia.

*Se deberá **revocar** el considerando 33.5. de la resolución impugnada, específicamente, respecto de las determinaciones siguientes:*

5.1. Conclusión 5_23_P2: *al haberse acreditado la comprobación de la transferencia en especie, se revoca liso y llanamente la sanción impuesta en la resolución controvertida.*

5.2. Conclusión 5_C25_P2: *al no existir las consecuencias de hecho y de Derecho en el Dictamen Consolidado que originaron la conclusión*

²³ Ver resolución impugnada, apartado 33.5, inciso h), pags. 727, 742 y 2490

sancionatoria se revoca liso y llanamente la sanción impuesta en la resolución controvertida.

5.3. *Conclusión 5_C15_P3: al existir una indebida motivación, se revoca la determinación para efectos de que la autoridad fiscalizadora, en ejercicio de sus facultades de verificación, valore la información proporcionada por el actor en el escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones, y en consecuencia, determine lo que corresponda.*

5.4. *Conclusión 5_C7_P1: al existir un error en la consideración del monto involucrado, se revoca la imposición de la sanción para efectos de que la autoridad fiscalizadora, a partir del monto involucrado de \$25,875.00.00, imponga la sanción correspondiente.*

5.5. *Ajuste del rebase de topes: hecho lo anterior, deberán ajustarse los correspondientes montos computados para efectos del rebase de topes, observando, en cualquier caso, el principio de non reformatio in peius.*

Lo anterior, significa que cualquier ajuste en la conclusión 5_C46_P3, debe tener como límite del monto involucrado de \$309,840.10 (trescientos nueve mil ochocientos cuarenta pesos 10/100 m.n.). (...)"

En ese orden de ideas, esta autoridad procede a emitir la modificación al Dictamen y la resolución ordenada, por lo que hace a las conclusiones 5_C15_P3 y 5_C7_P1, del considerando 33.5, dando cumplimiento en los términos que se precisan en la misma.

4. Que, conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso del recurso de apelación identificado como **SUP-RAP-279/2018**.

Es importante señalar que el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la determinación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) respecto del valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, el cual será equivalente al que tenga el salario mínimo

general vigente diario para todo el país,²⁴ mismo que para el ejercicio 2018, correspondió a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.).

Lo anterior de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo precedente establece *“A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.”*

En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de Medida y Actualización; por lo que, las multas impuestas en el presente Acuerdo, a las que les corresponde la aplicación del salario mínimo general vigente en el entonces Distrito Federal para el ejercicio 2018, se ajustan al valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente en 2018.

5. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las condiciones socio económicas del ente infractor.

Bajo esta tesitura, debe considerarse que los partidos políticos sujetos al procedimiento de fiscalización que cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que, en su caso, se les imponga, toda vez que mediante el Acuerdo IECM-ACU-CG-005-18 emitido por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de la Ciudad de México, se les asignó como financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2018, los montos siguientes:

²⁴De conformidad con el Punto Resolutivo PRIMERO de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de 2016, publicada el pasado 18 de diciembre de 2015, *“para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales (Delegaciones) del Distrito Federal.”*

Partido Político	Financiamiento público actividades ordinarias 2018
Partido Verde Ecologista de México	\$30,365,527.61

En este sentido el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales remitió el oficio IECM/DEAP/1342/18 suscrito por la Directora Ejecutiva de Asociaciones Políticas mediante el cual informó que en relación con el Partido Verde Ecologista de México no existen saldos pendientes por pagar

Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que los partidos políticos con financiamiento local y federal, tienen la capacidad económica suficiente con la cual puedan hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en la presente Resolución.

En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, pues aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean establecidas conforme a la normatividad electoral.

Cabe señalar que, en el caso de las sanciones impuestas a los partidos políticos con acreditación local considerando la capacidad económica del ente nacional, la ejecución de las sanciones se realizará por la autoridad electoral nacional, por lo que se procederá al cobro de las sanciones conforme a los criterios establecidos por el Instituto Nacional Electoral para los efectos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ahora bien, por lo que hace a la capacidad económica de los partidos políticos que recibieron financiamiento público estatal, con la finalidad de no afectar las actividades ordinarias del mismo, el pago de las sanciones económicas que en su caso se impongan se realizará en términos del Acuerdo INE/CG61/2017.

Esto es, las sanciones económicas impuestas con base en la capacidad económica estatal, deberán ejecutarse por el Organismo Público Local de la entidad federativa, para lo cual dicho organismo deberá considerar, en términos de lo dispuesto en el Lineamiento Sexto, apartado B del Acuerdo INE/CG61/2017, lo siguiente:

- Una vez que las sanciones impuestas por la autoridad electoral nacional queden firmes, sea por determinación de la autoridad jurisdiccional correspondiente o por que las mismas no hayan sido materia de impugnación, las sanciones se harán efectivas a partir del mes siguiente en que queden firmes.
- De conformidad con lo anterior, el Organismo Público Local deberá llevar el registro de las notificaciones realizadas a los sujetos obligados en la entidad federativa correspondiente, de las sanciones impuestas con cargo al financiamiento público estatal, en los formatos que para tal efecto proporcione la Dirección Jurídica de este Instituto, en cumplimiento del artículo Transitorio PRIMERO del Acuerdo INE/CG61/2017.
- El área competente de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales informará a los Organismos las sanciones que hayan quedado firmes.

Para lo anterior, la Unidad Técnica de Vinculación deberá remitir oportunamente las constancias de notificación correspondientes a la Dirección Jurídica.

- Para la ejecución de las sanciones el Organismo Público Local deberá considerar un descuento económico que no puede exceder del 25% (cincuenta por ciento) del financiamiento público mensual que reciba el instituto político en la entidad para el desarrollo de sus actividades ordinarias.

Conforme lo anterior, el Organismo Público Local fijará las sanciones a ejecutar en el mes correspondiente; considerando en todo momento, que de existir un conjunto de sanciones firmes pendientes de cobro por un importe superior al 25% del financiamiento público del partido político, éstas deberán ser cobradas conforme al orden en que quedaron firmes, en el entendido que no podrá descontarse un importe menor al equivalente al porcentaje antes mencionado; por lo que de acuerdo al monto de sanción, podrá acumular para su ejecución el número de sanciones necesarias hasta que queden completamente pagadas.

- Las sanciones impuestas y cobradas con recursos provenientes del financiamiento público estatal deberán de ser destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en términos de las disposiciones aplicables, por lo que se estará a lo establecido en el resolutivo respectivo, en términos de lo dispuesto en el Lineamiento Sexto, Apartado B, numeral 2 del Acuerdo INE/CG61/2017.
- El Organismo Público Local verificará en el plazo de 15 días hábiles siguientes a que estén firmes las sanciones impuestas a los candidatos, si los sujetos obligados realizaron el pago de forma voluntaria; para lo cual deberá atender la forma de pago que ordene la presente Resolución; para ello, dicho Organismo pondrá a disposición de los sujetos obligados las formas o procedimientos que les faciliten realizar el pago.
- Los OPLE deberán emitir un informe al corte de cada mes, que contenga las sanciones cobradas en dicho periodo, mismo que será hecho del conocimiento de la Unidad de Vinculación del Instituto, en términos de lo dispuesto en el Lineamiento Sexto, Apartado B, numeral 2 del Acuerdo INE/CG61/2017.

Por otra parte, en caso que las sanciones económicas sean impuestas con base en la capacidad económica federal, deberá procederse en términos de lo dispuesto en el Acuerdo INE/CG61/2017, en lo específico en el Lineamiento Sexto, apartado B, numeral 1, incisos c) y d) en relación al Apartado A del mismo Lineamiento.

Las sanciones impuestas y cobradas deberán de ser destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en términos de las disposiciones aplicables.

6. Que, derivado de lo anterior, el Dictamen relativo a las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Jefe de Gobierno, Diputados Locales y Alcaldes correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México, identificado como INE/CG1110/2017, apartado 33.5 correspondiente al Partido Verde Ecologista de México, se modifica en los siguientes términos:

No.	Observación Oficio: INE/UTF/DA/37791/18	SUP-RAP- 279/2018	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió																																																					
123	<p>Propaganda exhibida en vía pública distinta a espectaculares</p> <p>21. Derivado del monitoreo, se observó que el sujeto obligado realizó gastos de propaganda exhibida en la vía pública, que no fue reportada en el informe de campaña. Lo anterior se detalla en el Anexo 2_P3.</p> <p>Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:</p> <p>-El registro del ingreso y gasto en su contabilidad. -El o los comprobantes que amparen los gastos efectuados con todos los requisitos establecidos en la normativa. -Las evidencias del pago en caso de que éstos hubiesen excedido lo equivalente a 90 UMA, las copias de los cheques correspondientes con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario" o de las transferencias bancarias. -El o los contratos de prestación de servicios, debidamente requisitados y firmados. -Las hojas membretadas con la totalidad de los requisitos que establece la normativa. -Las evidencias fotográficas de la publicidad colocada en la vía pública. -El informe de campaña con las correcciones. -El o los avisos de contratación respectivos. -Las aclaraciones que a su derecho convengan.</p> <p>Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la LGPP; 46, numeral 1, 126, 127, 207, 209, 223, numeral 6, incisos b), h) e i); 241, numeral 1, inciso h); 319 y 378 del RF.</p>	<p>Al existir una indebida motivación, se revoca la determinación para efectos de que la autoridad fiscalizadora, en ejercicio de sus facultades de verificación, valore la información proporcionada por el actor en el escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones, y en consecuencia, determine lo que corresponda.</p>	<p>No atendida</p> <p>De la revisión efectuada al escrito de respuesta presentado se tuvo conocimiento de lo siguiente:</p> <p>El sujeto obligado presentó las pólizas con su respectivo soporte documental consistente en los comprobantes fiscales, contratos de prestación de servicios debidamente suscritos, hojas membretadas así como sus respectivas muestras, de las cuales 13 coinciden con los testigos señalados con (1) en la columna "Referencia" del Anexo 2_P3 del presente Dictamen; por tal razón, por lo que se refiere a estos testigos la observación quedó atendida.</p> <p>Respecto los testigos señalados con (2) en la columna "Referencia" del Anexo 2_P3 del presente Dictamen, aun cuando el sujeto obligado indicó pólizas en las que señaló que se encontraban reportados los testigos identificados en monitoreo, dichas pólizas carecen de documentación soporte, como son las muestras de propaganda en la vía pública; dicha omisión impide legal y materialmente a esta autoridad contar con elementos, - siquiera de naturaleza indiciaria- que le permitieran vincular los testigos observados con los registrados; por lo que la observación no quedó atendida.</p> <p>Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado en beneficio de su candidato, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF descrito en el apartado correspondiente del presente Dictamen.</p> <p>Identificación del costo para valuación en la Matriz de Precios (Pesos)</p> <table><tr><th>Id matriz de precios</th><th>Proveedor</th><th>Concepto</th><th>Unidad de medida</th><th>Importe con IVA</th></tr><tr><td></td><td>Medios Alternos en Publicidad Exterior SA de CV</td><td>Servicio de publicidad en kioscos</td><td>Servicio</td><td>17,250.00</td></tr><tr><td></td><td>Máxima Comunicación Gráfica, SC</td><td>Publicidad exhibida en vallas</td><td>Servicio</td><td>4,666.66</td></tr><tr><td></td><td>Pm Onstreet, SA de CV</td><td>Publicidad exhibida en casetas telefónicas</td><td>Servicio</td><td>13,966.40</td></tr></table> <p>Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen Consolidado la matriz de precios correspondiente a la entidad.</p> <p>La determinación del costo se presenta en el Anexo II-A, "Propaganda en Vía Pública" Cons. 2, 3 y 4.</p> <p>De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar gastos de publicidad exhibida en la vía pública</p> <table><tr><th>Concepto</th><th>Unidad de medida</th><th>Publicidad no localizada</th><th>Importe con IVA</th><th>Importe a acumular</th></tr><tr><td>Muebles Urbanos</td><td>Servicio</td><td>2</td><td>17,250.00</td><td>\$34,500.00</td></tr><tr><td>Vallas</td><td>Servicio</td><td>7</td><td>4,666.67</td><td>28,000.02</td></tr><tr><td>Casetas telefónicas</td><td>Servicio</td><td>4</td><td>13,966.40</td><td>55,865.60</td></tr><tr><td colspan="3">Total</td><td></td><td>\$93,958.00</td></tr></table> <p>Asimismo, de las evidencias se constató que dicha propaganda benefició de forma directa a la candidata siguiente:</p> <table><tr><th>Nombre</th><th>ID de conta</th><th>Rubro</th><th>Beneficio</th></tr><tr><td>Mariana Boy Tamborrell</td><td>40993</td><td>Propaganda Exhibida en Vía Pública Distinta a Espectaculares.</td><td>93,958.00</td></tr></table>	Id matriz de precios	Proveedor	Concepto	Unidad de medida	Importe con IVA		Medios Alternos en Publicidad Exterior SA de CV	Servicio de publicidad en kioscos	Servicio	17,250.00		Máxima Comunicación Gráfica, SC	Publicidad exhibida en vallas	Servicio	4,666.66		Pm Onstreet, SA de CV	Publicidad exhibida en casetas telefónicas	Servicio	13,966.40	Concepto	Unidad de medida	Publicidad no localizada	Importe con IVA	Importe a acumular	Muebles Urbanos	Servicio	2	17,250.00	\$34,500.00	Vallas	Servicio	7	4,666.67	28,000.02	Casetas telefónicas	Servicio	4	13,966.40	55,865.60	Total				\$93,958.00	Nombre	ID de conta	Rubro	Beneficio	Mariana Boy Tamborrell	40993	Propaganda Exhibida en Vía Pública Distinta a Espectaculares.	93,958.00	<p>5_C15_P3</p> <p>El sujeto obligado omitió reportar los gastos realizados por concepto de propaganda, por \$93,958.00</p>	<p>Egreso no reportado</p>	<p>79, numeral 1, inciso b), fracción I de LGPP y 127 del RF</p>
Id matriz de precios	Proveedor	Concepto	Unidad de medida	Importe con IVA																																																							
	Medios Alternos en Publicidad Exterior SA de CV	Servicio de publicidad en kioscos	Servicio	17,250.00																																																							
	Máxima Comunicación Gráfica, SC	Publicidad exhibida en vallas	Servicio	4,666.66																																																							
	Pm Onstreet, SA de CV	Publicidad exhibida en casetas telefónicas	Servicio	13,966.40																																																							
Concepto	Unidad de medida	Publicidad no localizada	Importe con IVA	Importe a acumular																																																							
Muebles Urbanos	Servicio	2	17,250.00	\$34,500.00																																																							
Vallas	Servicio	7	4,666.67	28,000.02																																																							
Casetas telefónicas	Servicio	4	13,966.40	55,865.60																																																							
Total				\$93,958.00																																																							
Nombre	ID de conta	Rubro	Beneficio																																																								
Mariana Boy Tamborrell	40993	Propaganda Exhibida en Vía Pública Distinta a Espectaculares.	93,958.00																																																								

No.	Observación Oficio: INE/UTF/DA/37791/18	SUP-RAP-279/2018	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
172	Observación del periodo de corrección	<p>5.5. Ajuste del rebase de topes: hecho lo anterior, deberán ajustarse los correspondientes montos computados para efectos del rebase de topes, observando, en cualquier caso, el principio de non reformatio in peius.</p> <p>Lo anterior, significa que cualquier ajuste en la conclusión 5_C46_P3, debe tener como límite del monto involucrado de \$309,840.10 (trescientos nueve mil ochocientos cuarenta pesos 10/100 m.n.).</p>	Derivado de las operaciones realizadas en acatamiento a la sentencia SUP-RAP-279/2018, la candidatura a la jefatura de gobierno rebasó el tope de gastos de campaña como se muestra en el ANEXO II del Dictamen.	5-C46-P3 El sujeto obligado excedió el tope de gastos del periodo de campaña; por un monto de \$309,840.10	Rebase del tope de gastos de campaña	Artículo 443, numeral 1, inciso f) de la LGIPE.

7. Que en tanto la Sala Superior, dejó intocadas las demás consideraciones que sustentan la Resolución identificada como **INE/CG1111/2018**, este Consejo General únicamente se avocará al estudio y análisis de lo relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en el considerando **33.5**, conclusiones **5_C15_P3**, **5_C7_P1** y **5-C46-P3** en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Superior, materia del presente Acuerdo.

Visto lo anterior, se modifica la imposición de la sanción para quedar en los términos siguientes:

e) En el capítulo de Conclusión Final de la Revisión del Informe, visible en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció las siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras de los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización: **Conclusiones: 5_C6_P1, 5_C7_P1, 5_C10_P2, 5_C11_P2, 5_C19_P2, 5_C15_P3, 5_C45_P3 y 5_C45-A_P3.**

No.	Conclusión	Monto involucrado
(...)	(...)	(...)
5_C7_P1	"El sujeto obligado omitió reportar gastos realizados por concepto de propaganda exhibida en vía pública distinta a espectaculares por un monto de \$25,875.00"	\$25,875.00
(...)	(...)	(...)
(...)	(...)	(...)
(...)	(...)	(...)

No.	Conclusión	Monto involucrado
5_C15_P3	<i>"El sujeto obligado omitió reportar los gastos realizados por concepto de propaganda, por \$93,958.00"</i>	\$93,958.00
(...)	(...)	(...)
(...)	(...)	(...)

(...)

Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

(...)

Conclusión 5 C7 P1

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.

- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$25,875.00 (veinticinco mil ochocientos setenta y cinco pesos 05/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado, en atención a los elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado, que en la especie asciende a un total de **\$ 25,872.60 (veinticinco mil ochocientos setenta y dos pesos 60/100 M.N.).**²⁵

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Verde Ecologista de México, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$25,872.60 (veinticinco mil ochocientos setenta y dos pesos 60/100 M.N.).**

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
(...)

²⁵ Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización.

Conclusión 5 C15 P3

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$93,958.00 (noventa y tres mil novecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.²⁶

²⁶ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado **\$93,899.00 (noventa y tres mil ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.).**²⁷

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Verde Ecologista de México, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$93,899.00 (noventa y tres mil ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.).**

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone, atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

(...)

materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

²⁷ Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización.

h) En el capítulo de Conclusiones finales de la Revisión de Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria, infractora del artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. **Conclusión 5_C48_P3**

No.	Conclusión	Monto involucrado
5-C46-P3	<i>“El sujeto obligado excedió el tope de gastos del periodo de campaña; por un monto de \$309,840.10”</i>	\$309,840.10

(...)

b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron.

Modo: El sujeto obligado excedió el tope de gastos de campaña establecido por la autoridad, por un monto de **\$309,840.10**. De ahí que contravino lo dispuesto en el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió de la revisión del Informe de Ingresos y Gastos de Campaña al cargo de Jefe de Gobierno, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Unidad Técnica de Fiscalización en la Ciudad de México

(...)

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente.

Conclusión 5_C46_P3

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral aplicables en materia de fiscalización, al exceder el tope de gastos de campaña establecido por la autoridad, contraviniendo expresamente lo establecido en el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado **consistió en rebasar los topes de gastos de campaña al cargo de Jefe de Gobierno establecidos por la autoridad**, durante la campaña en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México, concretándose en dicha entidad federativa, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales y acuerdos invocados, así como el oficio de errores y omisiones emitido por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión de los Informes de campaña correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México.
- El sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado asciende a **\$309,840.10 (trescientos nueve mil ochocientos cuarenta pesos 10/100 M.N.)**
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.²⁸

²⁸ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse sujeto obligado debe ser en razón del monto ejercido en exceso lo cual ya ha sido analizado en el apartado correspondiente de esta Resolución, por lo que procede sancionar al sujeto obligado, con una sanción económica equivalente un tanto igual al monto excedido.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica equivalente al **100% (cien por ciento)** sobre el monto involucrado **\$309,840.10 (trescientos nueve mil ochocientos cuarenta pesos 10/100 M.N.)**

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Verde Ecologista de México, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$309,840.10 (trescientos nueve mil ochocientos cuarenta pesos 10/100 M.N.)**

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

7. Que la sanción originalmente impuesta al Partido Verde Ecologista de México, en la resolución **INE/CG1111/2018** en su Resolutivo **QUINTO**, así como las modificaciones procedentes con base a lo razonado en el presente Acuerdo:

Sanciones en Resolución INE/CG1111/2018	Modificación	Sanción en Acatamiento a SUP-RAP-279/2018
Conclusión 5_C7_P1 Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$288,193.05 (doscientos ochenta y ocho mil ciento noventa y tres pesos 05/100 M.N.) .	Se modifica la imposición de la sanción a partir del monto involucrado de \$25,872.60	Conclusión 5_C7_P1 Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$25,872.60 (veinticinco mil ochocientos setenta y dos pesos 60/100 M.N.) .
Conclusión 5_C15_P3 Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$93,958.00 (noventa y tres mil novecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.) .	Motivación en el análisis de la documentación, para el efecto de valorar la información proporcionada en respuesta al oficio de errores y omisiones. Se mantiene la sanción impuesta.	Conclusión 5_C15_P3 Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$93,958.00 (noventa y tres mil novecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.) .
Conclusión 5_C46_P3 Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$309,840.10 (trescientos nueve mil ochocientos cuarenta pesos 10/100 M.N.)	Se ajusta el anexo II del Dictamen, para efectos de claridad en que el rebase de topes, fue por un monto de \$309,840.10	Conclusión 5_C46_P3 Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$309,840.10 (trescientos nueve mil ochocientos cuarenta pesos 10/100 M.N.)

8. Que, de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el presente Acuerdo, se impone al **Partido Verde Ecologista de México**, las sanciones siguientes:

QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando **33.5** de la presente Resolución, se imponen al **Partido Verde Ecologista de México**, las sanciones siguientes:

(...)

e) 8 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones: 5_C6_P1, 5_C7_P1, 5_C10_P2, 5_C11_P2, 5_C19_P2, 5_C15_P3, 5_C45_P3, 5_C45-A_P3.

(...)

Conclusión 5_C7_P1

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$25,872.60 (veinticinco mil ochocientos setenta y dos pesos 60/100 M.N.).**

(...)

Conclusión 5_C15_P3

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$93,958.00 (noventa y tres mil novecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.).**

(...)

h) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 5_C46_P3

Conclusión 5_C46_P3

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$309,840.10 (trescientos nueve mil ochocientos cuarenta pesos 10/100 M.N.)**

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

ACUERDA

PRIMERO. Se modifica la parte conducente de la Resolución **INE/CG1111/2018**, aprobados en sesión ordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Jefe de Gobierno, Diputados Locales y Alcaldes, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la Ciudad de México en los términos precisados en el Considerando **6** del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral que informe a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SUP-RAP-279/2018**, remitiéndole para ello las constancias atinentes.

TERCERO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México, a efecto de que procedan al cobro de las sanciones impuestas al partido político en el ámbito local, en términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las cuales se harán efectivas a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme cada una de ellas, de conformidad con lo establecido en el considerando respectivo de la presente Resolución.

CUARTO. Se instruye al Instituto Electoral de la Ciudad de México que en términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas con base en la capacidad económica estatal, sean destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables.

QUINTO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de las sanciones impuestas en el presente Acuerdo, en términos de lo dispuesto en el Artículo Transitorio PRIMERO del Acuerdo INE/CG61/2017.

SEXTO. Notifíquese el presente Acuerdo.

SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Fecha de Sincronización: 06/06/2018 11:05:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.
Usuario: FERNANDO CERESO ARENAS Fecha Monitoreo: 06/06/2018 11:05:00
ID Encuesta: 127865 Ticket: 127898 Estatus: Validado

Proceso Electoral: Proceso Electoral Concurrente 2017-2018

Entidad:	CIUDAD DE MEXICO	UBICACIÓN	
Municipio:	COYOACAN	Latitud:	19.299083709716797
Proceso:	CAMPAÑA	Longitud:	-99.150634765625
Ámbito:	LOCAL	Calle:	LUIS MURILLO
		Colonia:	BOSQUES DE TETLAMEYA
Hallazgo:	MUEBLES URBANOS	Número:	S/N
Otro Hallazgo:	NO APLICA		
Tamaño (metros):	ANCHO: 3.0 ALTO: 3.0	Código Postal:	04730
Cantidad:	1	Placas:	
Duración:			
Lema/Versión:	BOY A CREAR BANCOS DE ALIMENTOS CONTRA EL AMBRE	Entre Calle:	CALZADA DE TLALPAN
ID-INE:		Y Calle:	CIRCUITO ESTADIO AZTECA
Tipo Beneficio:	DIRECTO	Referencia:	BACE DE TAXIS
Información Adicional:			
BENEFICIADO(S):			

No. 1

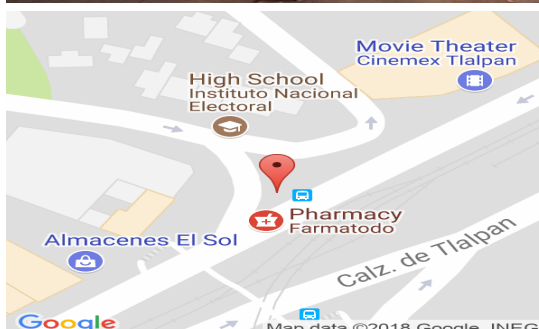
Fecha de Sincronización: 06/06/2018 11:05:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.

Usuario: FERNANDO CEREZO ARENAS Fecha Monitoreo: 06/06/2018 11:05:00

ID Encuesta: 127865 Ticket: 127898 Estatus: Validado

Distritos Locales:	COYOACAN (26)
Cargo:	JEFE DE GOBIERNO
Tipo Asociación:	PARTIDO
Sujeto Obligado:	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Beneficiado(s):	MARIANA BOY TAMBORRELL ()



Fecha de Sincronización: 06/06/2018 12:35:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.
Usuario: JESÚS NAVA ROJAS Fecha Monitoreo: 06/06/2018 12:35:00
ID Encuesta: 130675 Ticket: 130708 Estatus: Validado

Proceso Electoral: Proceso Electoral Concurrente 2017-2018

Entidad:	CIUDAD DE MEXICO	UBICACIÓN	
Municipio:	CUAUHTEMOC	Latitud:	19.422231674194336
Proceso:	CAMPAÑA	Longitud:	-99.14298248291016
Ámbito:	LOCAL	Calle:	CHIMALPOPOCA
		Colonia:	CENTRO
Hallazgo:	MUEBLES URBANOS	Número:	0
Otro Hallazgo:	NO APLICA		
Tamaño (metros):	ANCHO: 2.0 ALTO: 2.0	Código Postal:	06800
Cantidad:	1	Placas:	
Duración:			
Lema/Versión:	POR MAYOR VIGILANCIA EN RUTAS DE TRANSPORTE Y ESCUELAS PUBLICAS	Entre Calle:	EJE CENTRAL
ID-INE:		Y Calle:	BOLIVAR
Tipo Beneficio:	DIRECTO	Referencia:	ESTA EN LA ESQUINA DE EJE CENTRAL
Información Adicional:	PUESTO DE PERIODICO		
BENEFICIADO(S):			

Fecha de Sincronización: 06/06/2018 12:35:00

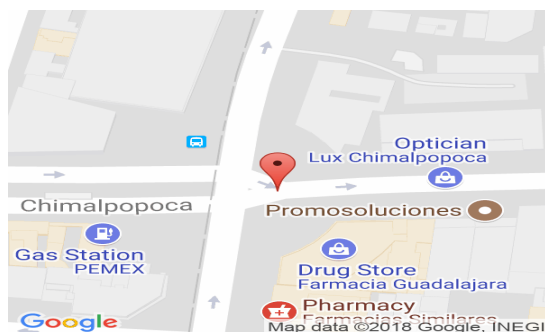
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.
Usuario: JESÚS NAVA ROJAS Fecha Monitoreo: 06/06/2018 12:35:00
ID Encuesta: 130675 Ticket: 130708 Estatus: Validado

No. 1	
Sujeto Obligado:	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Beneficiado(s):	MARIANA BOY TAMBORRELL ()
Distritos Locales:	CUAUHTEMOC (12)
Cargo:	JEFE DE GOBIERNO
Tipo Asociación:	PARTIDO



Fecha de Sincronización: 06/06/2018 12:35:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.
Usuario: JESÚS NAVA ROJAS Fecha Monitoreo: 06/06/2018 12:35:00
ID Encuesta: 130675 Ticket: 130708 Estatus: Validado



Fecha de Sincronización: 06/06/2018 12:54:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.
Usuario: JESÚS NAVA ROJAS Fecha Monitoreo: 06/06/2018 12:54:00
ID Encuesta: 131291 Ticket: 131324 Estatus: Validado

Proceso Electoral: Proceso Electoral Concurrente 2017-2018

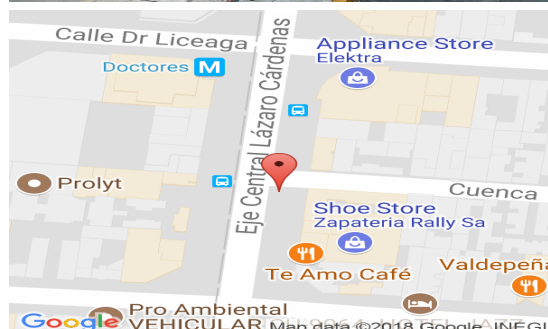
Entidad:	CIUDAD DE MEXICO	UBICACIÓN	
Municipio:	CUAUHTEMOC	Latitud:	19.420848846435547
Proceso:	CAMPAÑA	Longitud:	-99.14318084716797
Ámbito:	LOCAL	Calle:	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS
		Colonia:	OBRERA
Hallazgo:	MUEBLES URBANOS	Número:	0
Otro Hallazgo:	NO APLICA		
Tamaño (metros):	ANCHO: 2.0 ALTO: 2.0	Código Postal:	06800
Cantidad:	1	Placas:	
Duración:			
Lema/Versión:	BOY A AHORRARTE EN TRANSPORTE CON TARJETA DE PREPAGO	Entre Calle:	FRAY SERVANDO
ID-INE:		Y Calle:	IZAZAGA
Tipo Beneficio:	DIRECTO	Referencia:	EN LA ESQUINA SE FRAY SERVANDO
Información Adicional:	PUESTO DE PERIÓDICOS		
BENEFICIADO(S):			

No. 1

Fecha de Sincronización: 06/06/2018 12:54:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.
Usuario: JESÚS NAVA ROJAS Fecha Monitoreo: 06/06/2018 12:54:00
ID Encuesta: 131291 Ticket: 131324 Estatus: Validado

Distritos Locales:	CUAUHTEMOC (12)
Cargo:	JEFE DE GOBIERNO
Sujeto Obligado:	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Beneficiado(s):	MARIANA BOY TAMBORRELL ()
Tipo Asociación:	PARTIDO



Fecha de Sincronización: 06/06/2018 13:49:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.
Usuario: LILIANA MOTA RAMIREZ Fecha Monitoreo: 06/06/2018 13:49:00
ID Encuesta: 133169 Ticket: 133202 Estatus: Validado

Proceso Electoral: Proceso Electoral Concurrente 2017-2018

Entidad:	CIUDAD DE MEXICO	UBICACIÓN	
Municipio:	IZTAPALAPA	Latitud:	19.34693145751953
Proceso:	CAMPAÑA	Longitud:	-99.06634521484375
Ámbito:	LOCAL	Calle:	ERMITA IZTAPALAPA
		Colonia:	LOS ÁNGELES
Hallazgo:	MUEBLES URBANOS	Número:	SN
Otro Hallazgo:	NO APLICA		
Tamaño (metros):	ANCHO: 2.00 ALTO: 2.00	Código Postal:	09830
Cantidad:	1	Placas:	
Duración:			
Lema/Versión:	VOTA POR VERDE	Entre Calle:	HORTENSIA
ID-INE:		Y Calle:	AV DEL ROSAL
Tipo Beneficio:	DIRECTO	Referencia:	FRENTE A TIENDA DE SALAS SOFAMEX

Información

Adicional:

BENEFICIADO(S):

No. 1	
Tipo Asociación:	PARTIDO
Sujeto Obligado:	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Beneficiado(s):	MARIANA BOY TAMBORELL ()

Fecha de Sincronización: 06/06/2018 13:49:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.

Usuario: LILIANA MOTA RAMIREZ Fecha Monitoreo: 06/06/2018 13:49:00

ID Encuesta: 133169 Ticket: 133202 Estatus: Validado

Distritos Locales:	IZTAPALAPA (29)
Cargo:	JEFE DE GOBIERNO



Fecha de Sincronización: 07/06/2018 10:44:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.

Usuario: CLAUDIA JULIA CARRILLO ALBORNOS Fecha Monitoreo: 07/06/2018 10:44:00

ID Encuesta: 137189 Ticket: 137222 Estatus: Validado

Proceso Electoral: Proceso Electoral Concurrente 2017-2018

Entidad:	CIUDAD DE MEXICO	UBICACIÓN	
Municipio:	ALVARO OBREGON	Latitud:	19.349205017089844
Proceso:	CAMPAÑA	Longitud:	-99.2259292602539
Ámbito:	LOCAL	Calle:	CALZADA DE LAS AGUILAS
		Colonia:	SAN CLEMENTE NORTE
Hallazgo:	MUEBLES URBANOS	Número:	S/N
Otro Hallazgo:	NO APLICA		
Tamaño (metros):	ANCHO: 1.0 ALTO: 1.0	Código Postal:	01740
Cantidad:	1	Placas:	
Duración:			
Lema/Versión:	VAMOS POR PENA DE MUERTE A SECUESTRADORES Y ASESINOS	Entre Calle:	FRESNO
ID-INE:		Y Calle:	ALCANFORES
Tipo Beneficio:	DIRECTO	Referencia:	CERCA DE LA PARISINA

Información

Adicional:

BENEFICIADO(S):

No. 1

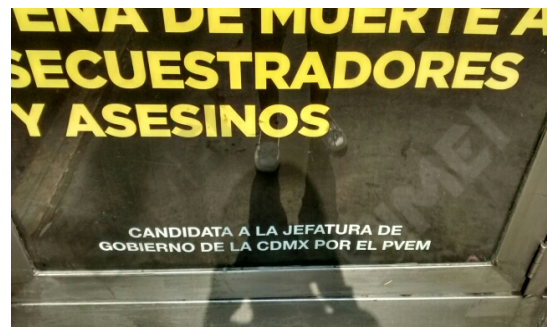
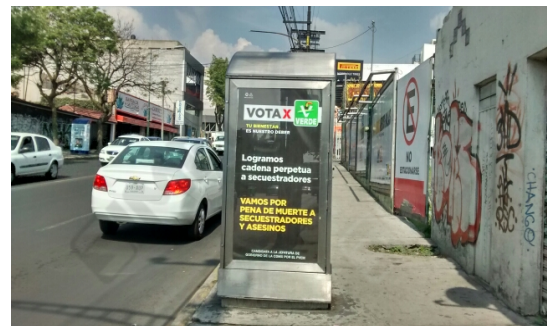
Fecha de Sincronización: 07/06/2018 10:44:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.

Usuario: CLAUDIA JULIA CARRILLO ALBORNOS Fecha Monitoreo: 07/06/2018 10:44:00

ID Encuesta: 137189 Ticket: 137222 Estatus: Validado

Distritos Locales:	ALVARO OBREGON (23)
Cargo:	JEFE DE GOBIERNO
Sujeto Obligado:	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Beneficiado(s):	MARIANA BOY TAMBORRELL ()
Tipo Asociación:	PARTIDO



Fecha de Sincronización: 07/06/2018 10:44:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.

Usuario: CLAUDIA JULIA CARRILLO ALBORNOS Fecha Monitoreo: 07/06/2018 10:44:00

ID Encuesta: 137189 Ticket: 137222 Estatus: Validado



Fecha de Sincronización: 07/06/2018 11:12:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.
Usuario: ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ Fecha Monitoreo: 07/06/2018 11:12:00
ID Encuesta: 137828 Ticket: 137861 Estatus: Validado

Proceso Electoral: Proceso Electoral Concurrente 2017-2018

Entidad:	CIUDAD DE MEXICO	UBICACIÓN	
Municipio:	MIGUEL HIDALGO	Latitud:	19.4382266998291
Proceso:	CAMPAÑA	Longitud:	-99.19416046142578
Ámbito:	LOCAL	Calle:	AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL
		Colonia:	GRANADA
Hallazgo:	MUEBLES URBANOS	Número:	SIN
Otro Hallazgo:	NO APLICA		
Tamaño (metros):	ANCHO: 3.0 ALTO: 3.0	Código Postal:	11520
Cantidad:	1	Placas:	
Duración:			
Lema/Versión:	BOY A AHORRARTE EN TRANSPORTE CON TARGETAS DE PREPAGO	Entre Calle:	EUGENIO SUE
ID-INE:		Y Calle:	EJERCITO NACIONAL
Tipo Beneficio:	DIRECTO	Referencia:	ESQUINA DE HOSPITAL ESPAÑOL

Información

Adicional:

BENEFICIADO(S):

No. 1

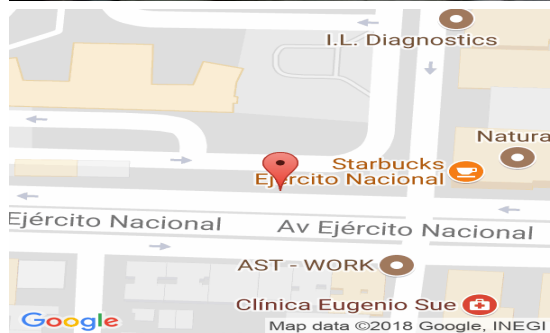
Fecha de Sincronización: 07/06/2018 11:12:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.

Usuario: ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ Fecha Monitoreo: 07/06/2018 11:12:00

ID Encuesta: 137828 Ticket: 137861 Estatus: Validado

Distritos Locales:	MIGUEL HIDALGO (13)
Cargo:	JEFE DE GOBIERNO
Tipo Asociación:	PARTIDO
Sujeto Obligado:	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Beneficiado(s):	MARIANA BOY TAMBORRELL ()



Fecha de Sincronización: 07/06/2018 11:15:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.
Usuario: MARA MARTINEZ CHIMAL Fecha Monitoreo: 07/06/2018 11:15:00
ID Encuesta: 137896 Ticket: 137929 Estatus: Validado

Proceso Electoral: Proceso Electoral Concurrente 2017-2018

Entidad:	CIUDAD DE MEXICO	UBICACIÓN	
Municipio:	IZTACALCO	Latitud:	19.394012451171875
Proceso:	CAMPAÑA	Longitud:	-99.09029388427734
Ámbito:	LOCAL	Calle:	AVENIDA TÉ
		Colonia:	BRAMADERO RAMOS MILLÁN
Hallazgo:	VALLAS	Número:	SN
Otro Hallazgo:	NO APLICA		
Tamaño (metros):	ANCHO: 3.0 ALTO: 2.0	Código Postal:	08400
Cantidad:	1	Placas:	
Duración:			
Lema/Versión:	BOY A AHORRARTE EN TRANSPORTE CON TARJETA DE PREPAGO	Entre Calle:	SUR 181
ID-INE:		Y Calle:	SUR 187
Tipo Beneficio:	DIRECTO	Referencia:	EN LA VALLA DE LA ESTACIÓN DEL METROBUS UPIICSA

Información

Adicional:

BENEFICIADO(S):

No. 1

Fecha de Sincronización: 07/06/2018 11:15:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.
Usuario: MARA MARTINEZ CHIMAL Fecha Monitoreo: 07/06/2018 11:15:00
ID Encuesta: 137896 Ticket: 137929 Estatus: Validado

Distritos Locales:	IZTACALCO (15)
Cargo:	JEFE DE GOBIERNO
Tipo Asociación:	PARTIDO
Sujeto Obligado:	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Beneficiado(s):	MARIANA BOY TAMBORRELL ()

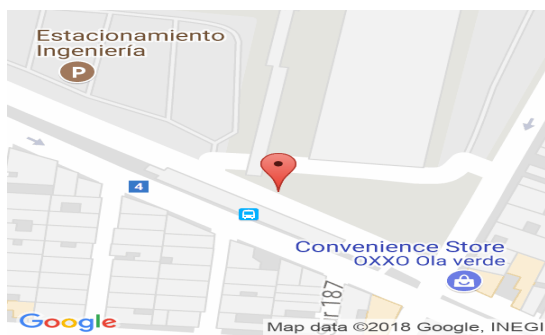


Fecha de Sincronización: 07/06/2018 11:15:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.

Usuario: MARA MARTINEZ CHIMAL Fecha Monitoreo: 07/06/2018 11:15:00

ID Encuesta: 137896 Ticket: 137929 Estatus: Validado



Fecha de Sincronización: 07/06/2018 11:34:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.
Usuario: MAURICIO GEOVANI REYES RUIZ Fecha Monitoreo: 07/06/2018 11:34:00
ID Encuesta: 138829 Ticket: 138862 Estatus: Validado

Proceso Electoral: Proceso Electoral Concurrente 2017-2018

Entidad:	CIUDAD DE MEXICO	UBICACIÓN	
Municipio:	ALVARO OBREGON	Latitud:	19.342437744140625
Proceso:	CAMPAÑA	Longitud:	-99.1904067993164
Ámbito:	LOCAL	Calle:	REY CUAUHTEMOC
		Colonia:	SAN ÁNGEL
Hallazgo:	MUEBLES URBANOS	Número:	SN
Otro Hallazgo:	NO APLICA		
Tamaño (metros):	ANCHO: 3.0 ALTO: 6.0	Código Postal:	01000
Cantidad:	1	Placas:	
Duración:			
Lema/Versión:	BOY A CREAR BANCOS DE ALIMENTOS CONTRA EL HAMBRE	Entre Calle:	DR GALVEZ
ID-INE:		Y Calle:	AV REVOLUCIÓN
Tipo Beneficio:	DIRECTO	Referencia:	AFUERA DE LA TIENDA WALDOS
Información Adicional:	KDF-082		
BENEFICIADO(S):			

No. 1	
Sujeto Obligado:	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

Fecha de Sincronización: 07/06/2018 11:34:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.

Usuario: MAURICIO GEOVANI REYES RUIZ Fecha Monitoreo: 07/06/2018 11:34:00

ID Encuesta: 138829 Ticket: 138862 Estatus: Validado

Beneficiado(s):	MARIANA BOY TAMBORRELL ()
Distritos Locales:	LA MAGDALENA CONTRERAS (33)
Cargo:	JEFE DE GOBIERNO
Tipo Asociación:	PARTIDO

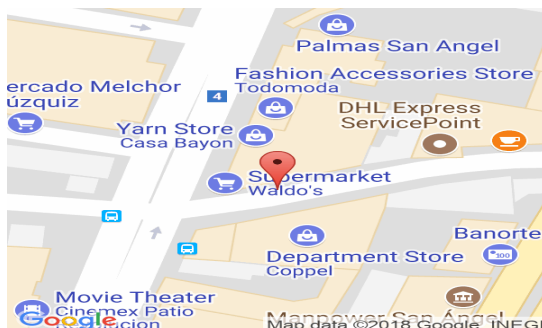


Fecha de Sincronización: 07/06/2018 11:34:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.

Usuario: MAURICIO GEOVANI REYES RUIZ Fecha Monitoreo: 07/06/2018 11:34:00

ID Encuesta: 138829 Ticket: 138862 Estatus: Validado



Fecha de Sincronización: 07/06/2018 11:31:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.
Usuario: ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ Fecha Monitoreo: 07/06/2018 11:31:00
ID Encuesta: 139256 Ticket: 139289 Estatus: Validado

Proceso Electoral: Proceso Electoral Concurrente 2017-2018

Entidad:	CIUDAD DE MEXICO	UBICACIÓN	
Municipio:	MIGUEL HIDALGO	Latitud:	19.438823699951172
Proceso:	CAMPAÑA	Longitud:	-99.21408081054688
Ámbito:	LOCAL	Calle:	PERIFÉRICO BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO
		Colonia:	COLONIA IRRIGACIÓN
Hallazgo:	MUEBLES URBANOS	Número:	SIN
Otro Hallazgo:	NO APLICA		
Tamaño (metros):	ANCHO: 2.0 ALTO: 2.0	Código Postal:	11510
Cantidad:	1	Placas:	
Duración:			
Lema/Versión:	SIN	Entre Calle:	PEROFERICO
ID-INE:		Y Calle:	EJÉRCITO NACIONAL
Tipo Beneficio:	DIRECTO	Referencia:	BAJO PUENTE

Información Adicional:

BENEFICIADO(S):

No. 1	
Distritos Locales:	MIGUEL HIDALGO (13)

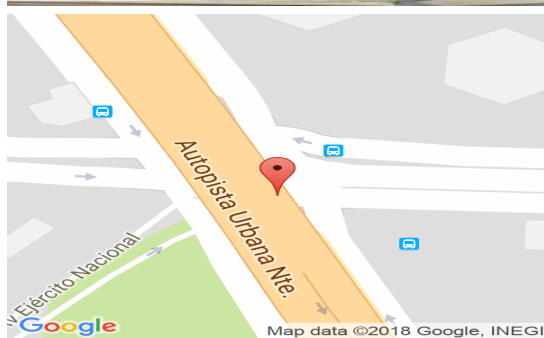
Fecha de Sincronización: 07/06/2018 11:31:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.

Usuario: ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ Fecha Monitoreo: 07/06/2018 11:31:00

ID Encuesta: 139256 Ticket: 139289 Estatus: Validado

Cargo:	JEFE DE GOBIERNO
Tipo Asociación:	PARTIDO
Sujeto Obligado:	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Beneficiado(s):	MARIANA BOY TAMBORRELL ()



Fecha de Sincronización: 07/06/2018 11:53:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.
Usuario: MARCO ANTONIO JARA RAMOS Fecha Monitoreo: 07/06/2018 11:53:00
ID Encuesta: 139912 Ticket: 139945 Estatus: Validado

Proceso Electoral: Proceso Electoral Concurrente 2017-2018

Entidad:	CIUDAD DE MEXICO	UBICACIÓN	
Municipio:	GUSTAVO A. MADERO	Latitud:	19.47008514404297
Proceso:	CAMPAÑA	Longitud:	-99.1228256225586
Ámbito:	LOCAL	Calle:	CALZADA DE GUADALUPE
		Colonia:	GUADALUPE TEPEYAC
Hallazgo:	MUEBLES URBANOS	Número:	S/N
Otro Hallazgo:	NO APLICA		
Tamaño (metros):	ANCHO: 1.5 ALTO: 2.5	Código Postal:	07840
Cantidad:	1	Placas:	
Duración:			
Lema/Versión:	VOY A ACABAR CON LAS CONSTRUCCIONES IRREGULARES	Entre Calle:	CALZ GUADALUPE
ID-INE:		Y Calle:	SAUL
Tipo Beneficio:	DIRECTO	Referencia:	PUESTO DE PERIODICOS
Información Adicional:			
BENEFICIADO(S):			

Fecha de Sincronización: 07/06/2018 11:53:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.
Usuario: MARCO ANTONIO JARA RAMOS Fecha Monitoreo: 07/06/2018 11:53:00
ID Encuesta: 139912 Ticket: 139945 Estatus: Validado

No. 1	
Distritos Locales:	GUSTAVO A. MADERO (2)
Cargo:	JEFE DE GOBIERNO
Sujeto Obligado:	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Beneficiado(s):	MARIANA BOY TAMBORRELL ()
Tipo Asociación:	PARTIDO



Fecha de Sincronización: 07/06/2018 12:20:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.
Usuario: FERNANDO CERESO ARENAS Fecha Monitoreo: 07/06/2018 12:20:00
ID Encuesta: 139934 Ticket: 139967 Estatus: Validado

Proceso Electoral: Proceso Electoral Concurrente 2017-2018

Entidad:	CIUDAD DE MEXICO	UBICACIÓN	
Municipio:	COYOACAN	Latitud:	19.335651397705078
Proceso:	CAMPAÑA	Longitud:	-99.14179992675781
Ámbito:	LOCAL	Calle:	CALZADA DE TLALPAN
		Colonia:	EL CENTINELA
Hallazgo:	VALLAS	Número:	S/N
Otro Hallazgo:	NO APLICA		
Tamaño (metros):	ANCHO: 6.0 ALTO: 2.5	Código Postal:	04450
Cantidad:	1	Placas:	
Duración:			
Lema/Versión:	BOY A INCENTIVAR A EMPRESAS QUE CONTRATEN JÓVENES	Entre Calle:	CIUDAD JARDÍN
ID-INE:		Y Calle:	CIUDAD JARDÍN
Tipo Beneficio:	DIRECTO	Referencia:	ESTACIÓN METROBUS CIUDAD JARDÍN

Información

Adicional:

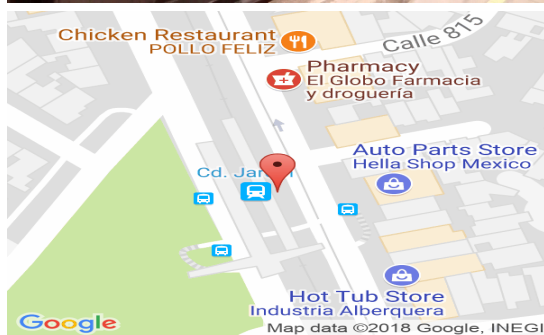
BENEFICIADO(S):

No. 1

Fecha de Sincronización: 07/06/2018 12:20:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.
Usuario: FERNANDO CERESO ARENAS Fecha Monitoreo: 07/06/2018 12:20:00
ID Encuesta: 139934 Ticket: 139967 Estatus: Validado

Distritos Locales:	COYOACAN (26)
Cargo:	JEFE DE GOBIERNO
Tipo Asociación:	PARTIDO
Sujeto Obligado:	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Beneficiado(s):	MARIANA BOY TAMBORRELL ()



Fecha de Sincronización: 07/06/2018 12:28:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.
Usuario: FERNANDO CERESO ARENAS Fecha Monitoreo: 07/06/2018 12:28:00
ID Encuesta: 140314 Ticket: 140347 Estatus: Validado

Proceso Electoral: Proceso Electoral Concurrente 2017-2018

Entidad:	CIUDAD DE MEXICO	UBICACIÓN	
Municipio:	COYOACAN	Latitud:	19.33582305908203
Proceso:	CAMPAÑA	Longitud:	-99.14189910888672
Ámbito:	LOCAL	Calle:	CALZADA DE TLALPAN
		Colonia:	EL CENTINELA
Hallazgo:	CAJAS DE LUZ	Número:	S/N
Otro Hallazgo:	NO APLICA		
Tamaño (metros):	ANCHO: 1.5 ALTO: 2.0	Código Postal:	04450
Cantidad:	1	Placas:	
Duración:			
Lema/Versión:	BOY POR MAYOR VIGILANCIA EN TRANSPORTE Y ESCUELAS PÚBLICAS	Entre Calle:	CIUDAD JARDÍN
ID-INE:		Y Calle:	CIUDAD JARDÍN
Tipo Beneficio:	DIRECTO	Referencia:	ESTACIÓN DE METROBÚS CIUDAD JARDÍN
Información Adicional:			
BENEFICIADO(S):			

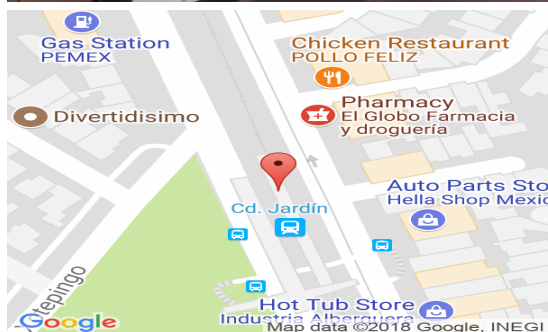
Fecha de Sincronización: 07/06/2018 12:28:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.

Usuario: FERNANDO CERREZO ARENAS Fecha Monitoreo: 07/06/2018 12:28:00

ID Encuesta: 140314 Ticket: 140347 Estatus: Validado

No. 1	
Distritos Locales:	COYOACAN (26)
Cargo:	JEFE DE GOBIERNO
Sujeto Obligado:	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Beneficiado(s):	MARIANA BOY TAMBORRELL ()
Tipo Asociación:	PARTIDO



Fecha de Sincronización: 07/06/2018 12:51:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.
Usuario: MARA MARTINEZ CHIMAL Fecha Monitoreo: 07/06/2018 12:51:00
ID Encuesta: 141116 Ticket: 141149 Estatus: Validado

Proceso Electoral: Proceso Electoral Concurrente 2017-2018

Entidad:	CIUDAD DE MEXICO	UBICACIÓN	
Municipio:	IZTACALCO	Latitud:	19.38372230529785
Proceso:	CAMPAÑA	Longitud:	-99.0658187866211
Ámbito:	LOCAL	Calle:	RETORNO 1 SUR 28
		Colonia:	AGRÍCOLA ORIENTAL
Hallazgo:	VALLAS	Número:	SN
Otro Hallazgo:	NO APLICA		
Tamaño (metros):	ANCHO: 3.0 ALTO: 2.0	Código Postal:	08500
Cantidad:	1	Placas:	
Duración:			
Lema/Versión:	BOY A CREAR BANCOS DE ALIMENTOS CONTRA EL HAMBRE	Entre Calle:	AV. VANAL DE TEZONTLE
ID-INE:		Y Calle:	ANDADOR AMAPOLA
Tipo Beneficio:	DIRECTO	Referencia:	EN LA VALLA DE LA ESTACIÓN DEL METROBÚS LEYES DE REFORMA
Información Adicional:			
BENEFICIADO(S):			

Fecha de Sincronización: 07/06/2018 12:51:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.
Usuario: MARA MARTINEZ CHIMAL Fecha Monitoreo: 07/06/2018 12:51:00
ID Encuesta: 141116 Ticket: 141149 Estatus: Validado

No. 1	
Distritos Locales:	IZTACALCO (11)
Cargo:	JEFE DE GOBIERNO
Tipo Asociación:	PARTIDO
Sujeto Obligado:	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Beneficiado(s):	MARIANA BOY TAMBORRELL ()

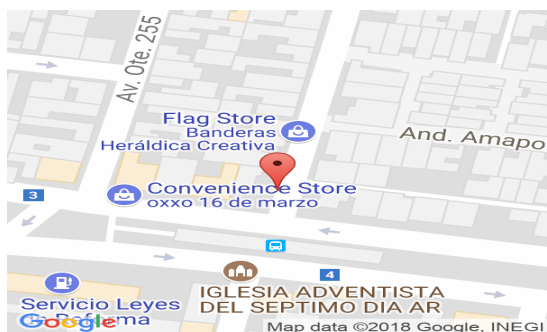


Fecha de Sincronización: 07/06/2018 12:51:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.

Usuario: MARA MARTINEZ CHIMAL Fecha Monitoreo: 07/06/2018 12:51:00

ID Encuesta: 141116 Ticket: 141149 Estatus: Validado



Fecha de Sincronización: 07/06/2018 14:27:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.
Usuario: MAURICIO GEOVANI REYES RUIZ Fecha Monitoreo: 07/06/2018 14:27:00
ID Encuesta: 143511 Ticket: 143544 Estatus: Validado

Proceso Electoral: Proceso Electoral Concurrente 2017-2018

Entidad:	CIUDAD DE MEXICO	UBICACIÓN	
Municipio:	ALVARO OBREGON	Latitud:	19.338424682617188
Proceso:	CAMPAÑA	Longitud:	-99.19454956054688
Ámbito:	LOCAL	Calle:	RIO DE LA MAGDALENA
		Colonia:	LORETO Y CAMPAMENTO
Hallazgo:	MUEBLES URBANOS	Número:	SN
Otro Hallazgo:	NO APLICA		
Tamaño (metros):	ANCHO: 1.5 ALTO: 2.5	Código Postal:	01000
Cantidad:	1	Placas:	
Duración:			
Lema/Versión:	TU BIENESTAR ES NUESTRO DEBER	Entre Calle:	DONATO GUERRA
ID-INE:		Y Calle:	AV REVOLUCIÓN
Tipo Beneficio:	DIRECTO	Referencia:	AFUERA DE PLAZA LORETO
Información Adicional:	AO079		
BENEFICIADO(S):			

No. 1	
Sujeto Obligado:	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

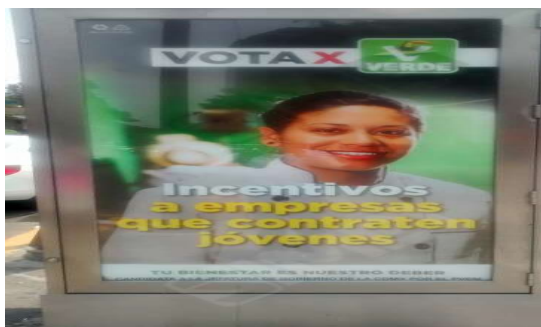
Fecha de Sincronización: 07/06/2018 14:27:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.

Usuario: MAURICIO GEOVANI REYES RUIZ Fecha Monitoreo: 07/06/2018 14:27:00

ID Encuesta: 143511 Ticket: 143544 Estatus: Validado

Beneficiado(s):	MARIANA BOY TAMBORRELL ()
Tipo Asociación:	PARTIDO
Distritos Locales:	LA MAGDALENA CONTRERAS (33)
Cargo:	JEFE DE GOBIERNO

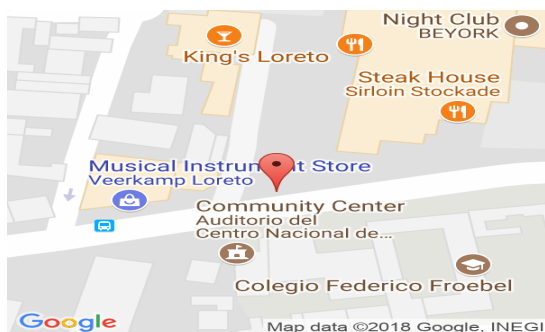


Fecha de Sincronización: 07/06/2018 14:27:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.

Usuario: MAURICIO GEOVANI REYES RUIZ Fecha Monitoreo: 07/06/2018 14:27:00

ID Encuesta: 143511 Ticket: 143544 Estatus: Validado



Fecha de Sincronización: 07/06/2018 14:33:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.

Usuario: MAURICIO GEOVANI REYES RUIZ Fecha Monitoreo: 07/06/2018 14:33:00

ID Encuesta: 143587 Ticket: 143620 Estatus: Validado

Proceso Electoral: Proceso Electoral Concurrente 2017-2018

Entidad:	CIUDAD DE MEXICO	UBICACIÓN	
Municipio:	ALVARO OBREGON	Latitud:	19.33820915222168
Proceso:	CAMPAÑA	Longitud:	-99.19522857666016
Ámbito:	LOCAL	Calle:	EJE VIAL 10 SUR
		Colonia:	PROGRESO TIZAPÁN
Hallazgo:	MUEBLES URBANOS	Número:	101
Otro Hallazgo:	NO APLICA		
Tamaño (metros):	ANCHO: 1.5 ALTO: 2.5	Código Postal:	01080
Cantidad:	1	Placas:	
Duración:			
Lema/Versión:	LOGRAMOS CADENA PERPETUA A SECUESTRADORES/ VAMOS POR PENA DE MUERTE A SECUESTRADORES Y ASESINOS	Entre Calle:	DONATO GUERRA
ID-INE:		Y Calle:	RAMON CORONA
Tipo Beneficio:	DIRECTO	Referencia:	FRENTE AL CONDominio RIO MAGDALENA
Información Adicional:	AO003		
BENEFICIADO(S):			

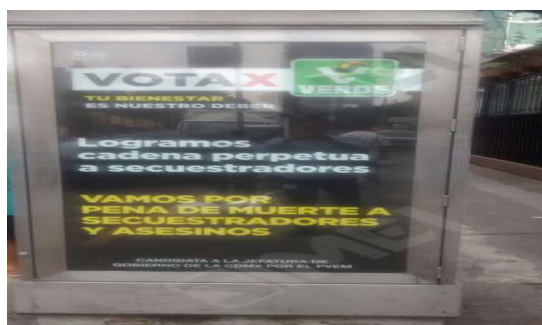
Fecha de Sincronización: 07/06/2018 14:33:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.

Usuario: MAURICIO GEOVANI REYES RUIZ Fecha Monitoreo: 07/06/2018 14:33:00

ID Encuesta: 143587 Ticket: 143620 Estatus: Validado

No. 1	
Sujeto Obligado:	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Beneficiado(s):	MARIANA BOY TAMBORRELL ()
Tipo Asociación:	PARTIDO
Distritos Locales:	LA MAGDALENA CONTRERAS (33)
Cargo:	JEFE DE GOBIERNO

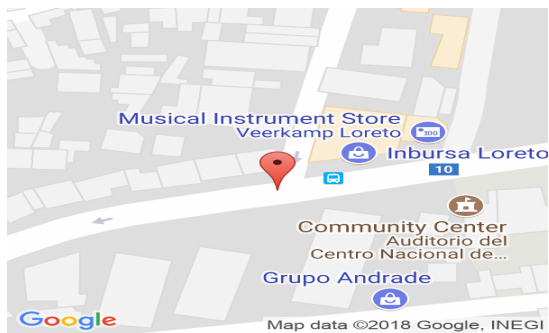


Fecha de Sincronización: 07/06/2018 14:33:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.

Usuario: MAURICIO GEOVANI REYES RUIZ Fecha Monitoreo: 07/06/2018 14:33:00

ID Encuesta: 143587 Ticket: 143620 Estatus: Validado



Fecha de Sincronización: 07/06/2018 14:39:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.
Usuario: MAURICIO GEOVANI REYES RUIZ Fecha Monitoreo: 07/06/2018 14:39:00
ID Encuesta: 144050 Ticket: 144083 Estatus: Validado

Proceso Electoral: Proceso Electoral Concurrente 2017-2018

Entidad:	CIUDAD DE MEXICO	UBICACIÓN	
Municipio:	ALVARO OBREGON	Latitud:	19.337066650390625
Proceso:	CAMPAÑA	Longitud:	-99.19762420654297
Ámbito:	LOCAL	Calle:	RIO DE LA MAGDALENA
		Colonia:	PROGRESO TIZAPÁN
Hallazgo:	MUEBLES URBANOS	Número:	116
Otro Hallazgo:	NO APLICA		
Tamaño (metros):	ANCHO: 1.5 ALTO: 2.5	Código Postal:	01080
Cantidad:	1	Placas:	
Duración:			
Lema/Versión:	VAMOS POR PENA DE MUERTE A SECUESTRADORES Y ASESINOS	Entre Calle:	IGLESIA
ID-INE:		Y Calle:	RAMON CORONA
Tipo Beneficio:	DIRECTO	Referencia:	FRENTE A EDIFICIO DE BANSEFI
Información Adicional:	AO80		
BENEFICIADO(S):			

No. 1

Fecha de Sincronización: 07/06/2018 14:39:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.
Usuario: MAURICIO GEOVANI REYES RUIZ Fecha Monitoreo: 07/06/2018 14:39:00
ID Encuesta: 144050 Ticket: 144083 Estatus: Validado

Distritos Locales:	LA MAGDALENA CONTRERAS (33)
Cargo:	JEFE DE GOBIERNO
Sujeto Obligado:	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Beneficiado(s):	MARIANA BOY TAMBORRELL ()
Tipo Asociación:	PARTIDO



Fecha de Sincronización: 07/06/2018 14:39:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.

Usuario: MAURICIO GEOVANI REYES RUIZ Fecha Monitoreo: 07/06/2018 14:39:00

ID Encuesta: 144050 Ticket: 144083 Estatus: Validado



Fecha de Sincronización: 19/06/2018 12:00:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.
Usuario: ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ Fecha Monitoreo: 19/06/2018 12:00:00
ID Encuesta: 155668 Ticket: 155701 Estatus: Validado

Proceso Electoral: Proceso Electoral Concurrente 2017-2018

Entidad:	CIUDAD DE MEXICO	UBICACIÓN	
Municipio:	MIGUEL HIDALGO	Latitud:	19.4167537689209
Proceso:	CAMPAÑA	Longitud:	-99.180419921875
Ámbito:	LOCAL	Calle:	AVENIDA CONSTITUYENTES
		Colonia:	SAN MIGUEL CHAPULTEPEC II SECCIÓN
Hallazgo:	VALLAS	Número:	690
Otro Hallazgo:	NO APLICA		
Tamaño (metros):	ANCHO: 7.0 ALTO: 3.0	Código Postal:	11850
Cantidad:	1	Placas:	
Duración:			
Lema/Versión:	REPARAR LA FUGAS ASI HABRA AGUA PARA TODOS	Entre Calle:	CONSTITUYENTES
ID-INE:		Y Calle:	CHAPULTEPEC
Tipo Beneficio:	DIRECTO	Referencia:	ESQUINA
Información Adicional:			
BENEFICIADO(S):			

No. 1

Fecha de Sincronización: 19/06/2018 12:00:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.
Usuario: ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ Fecha Monitoreo: 19/06/2018 12:00:00
ID Encuesta: 155668 Ticket: 155701 Estatus: Validado

Distritos Locales:	MIGUEL HIDALGO (13)
Cargo:	JEFE DE GOBIERNO
Beneficiado(s):	MARIANA BOY TAMBORRELL ()
Sujeto Obligado:	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Tipo Asociación:	PARTIDO



Fecha de Sincronización: 20/06/2018 11:37:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.

Usuario: FERNANDO CERESO ARENAS Fecha Monitoreo: 20/06/2018 11:37:00

ID Encuesta: 163833 Ticket: 163866 Estatus: Validado

Proceso Electoral: Proceso Electoral Concurrente 2017-2018

Entidad:	CIUDAD DE MEXICO	UBICACIÓN	
Municipio:	COYOACAN	Latitud:	19.323772430419922
Proceso:	CAMPAÑA	Longitud:	-99.13790893554688
Ámbito:	LOCAL	Calle:	CALZADA DE TLALPAN
		Colonia:	PRADO COYOACÁN
Hallazgo:	VALLAS	Número:	S/N
Otro Hallazgo:	NO APLICA		
Tamaño (metros):	ANCHO: 6.8 ALTO: 2.5	Código Postal:	04815
Cantidad:	1	Placas:	
Duración:			
Lema/Versión:	BOY A CREAR BANCO DE ALIMENTOS CONTRA EL AMBRE	Entre Calle:	VICENTE GUERRERO
ID-INE:		Y Calle:	TEZOZOMO
Tipo Beneficio:	DIRECTO	Referencia:	ESTACIÓN TREN LIGERO NEZAHUALPILLI

Información

Adicional:

BENEFICIADO(S):

No. 1

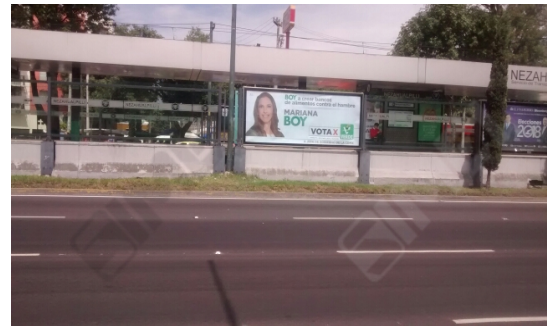
Fecha de Sincronización: 20/06/2018 11:37:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.

Usuario: FERNANDO CERESO ARENAS Fecha Monitoreo: 20/06/2018 11:37:00

ID Encuesta: 163833 Ticket: 163866 Estatus: Validado

Tipo Asociación:	PARTIDO
Distritos Locales:	COYOACAN (26)
Cargo:	JEFE DE GOBIERNO
Beneficiado(s):	MARIANA BOY TAMBORRELL ()
Sujeto Obligado:	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO



Fecha de Sincronización: 20/06/2018 11:49:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.
Usuario: FERNANDO CERESO ARENAS Fecha Monitoreo: 20/06/2018 11:49:00
ID Encuesta: 164107 Ticket: 164140 Estatus: Validado

Proceso Electoral: Proceso Electoral Concurrente 2017-2018

Entidad:	CIUDAD DE MEXICO	UBICACIÓN	
Municipio:	COYOACAN	Latitud:	19.32747459411621
Proceso:	CAMPAÑA	Longitud:	-99.13909149169922
Ámbito:	LOCAL	Calle:	CALZADA DE TLALPAN
		Colonia:	EMILIANO ZAPATA
Hallazgo:	VALLAS	Número:	S/N
Otro Hallazgo:	NO APLICA		
Tamaño (metros):	ANCHO: 6.0 ALTO: 2.5	Código Postal:	04815
Cantidad:	1	Placas:	
Duración:			
Lema/Versión:	BOY A CREAR BANCOS DE ALIMENTOS CONYRA EL AMBRE	Entre Calle:	PEDRO ARVIZU
ID-INE:		Y Calle:	XOTEPINGO
Tipo Beneficio:	DIRECTO	Referencia:	ESTACIÓN TREN LIGERO XOTEPINGO

Información

Adicional:

BENEFICIADO(S):

No. 1

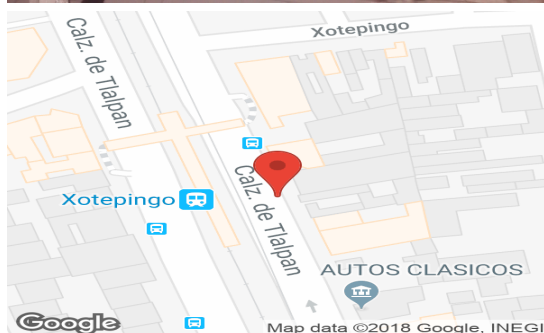
Fecha de Sincronización: 20/06/2018 11:49:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.

Usuario: FERNANDO CERESO ARENAS Fecha Monitoreo: 20/06/2018 11:49:00

ID Encuesta: 164107 Ticket: 164140 Estatus: Validado

Sujeto Obligado:	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Distritos Locales:	COYOACAN (26)
Cargo:	JEFE DE GOBIERNO
Tipo Asociación:	PARTIDO
Beneficiado(s):	MARIANA BOY TAMBORRELL ()



Fecha de Sincronización: 20/06/2018 11:56:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.
Usuario: FERNANDO CERESO ARENAS Fecha Monitoreo: 20/06/2018 11:56:00
ID Encuesta: 164305 Ticket: 164338 Estatus: Validado

Proceso Electoral: Proceso Electoral Concurrente 2017-2018

Entidad:	CIUDAD DE MEXICO	UBICACIÓN	
Municipio:	COYOACAN	Latitud:	19.33165168762207
Proceso:	CAMPAÑA	Longitud:	-99.14042663574219
Ámbito:	LOCAL	Calle:	CALZADA DE TLALPAN
		Colonia:	AVANTE
Hallazgo:	VALLAS	Número:	S/N
Otro Hallazgo:	NO APLICA		
Tamaño (metros):	ANCHO: 6.0 ALTO: 2.5	Código Postal:	04460
Cantidad:	1	Placas:	
Duración:			
Lema/Versión:	BOY A REPARAR LAS FUGAS ASÍ HABRA AGUA PARA TODOS	Entre Calle:	XOTEPINGO
ID-INE:		Y Calle:	LA VIRGEN
Tipo Beneficio:	DIRECTO	Referencia:	ESTACIÓN TREN LIGERO LA VIRGEN

Información

Adicional:

BENEFICIADO(S):

No. 1	
Sujeto Obligado:	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

Fecha de Sincronización: 20/06/2018 11:56:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.

Usuario: FERNANDO CERESO ARENAS Fecha Monitoreo: 20/06/2018 11:56:00

ID Encuesta: 164305 Ticket: 164338 Estatus: Validado

Distritos Locales:	COYOACAN (26)
Cargo:	JEFE DE GOBIERNO
Tipo Asociación:	PARTIDO
Beneficiado(s):	MARIANA BOY TAMBORRELL ()



Fecha de Sincronización: 20/06/2018 12:04:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.

Usuario: FERNANDO CEREZO ARENAS Fecha Monitoreo: 20/06/2018 12:04:00

ID Encuesta: 164536 Ticket: 164569 Estatus: Validado

Proceso Electoral: Proceso Electoral Concurrente 2017-2018

Entidad:	CIUDAD DE MEXICO	UBICACIÓN	
Municipio:	COYOACAN	Latitud:	19.341033935546875
Proceso:	CAMPAÑA	Longitud:	-99.14326477050781
Ámbito:	LOCAL	Calle:	CALZADA DE TLALPAN
		Colonia:	CAMPESTRE CHURUBUSCO
Hallazgo:	VALLAS	Número:	S/N
Otro Hallazgo:	NO APLICA		
Tamaño (metros):	ANCHO: 6.8 ALTO: 2.5	Código Postal:	04200
Cantidad:	1	Placas:	
Duración:			
Lema/Versión:	PERMISO LABORAL PARA ASISTIR A REUNIONES ESCOLARES	Entre Calle:	AV LAS TORRES
ID-INE:		Y Calle:	AV TAXQUEÑA
Tipo Beneficio:	DIRECTO	Referencia:	ESTACIÓN TREN LIGERO LAS TORRES

Información

Adicional:

BENEFICIADO(S):

No. 1

Fecha de Sincronización: 20/06/2018 12:04:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.

Usuario: FERNANDO CERREZO ARENAS Fecha Monitoreo: 20/06/2018 12:04:00

ID Encuesta: 164536 Ticket: 164569 Estatus: Validado

Distritos Locales:	COYOACAN (26)
Cargo:	JEFE DE GOBIERNO
Tipo Asociación:	PARTIDO
Beneficiado(s):	MARIANA BOY TAMBORRELL ()
Sujeto Obligado:	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO



Fecha de Sincronización: 20/06/2018 13:06:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.

Usuario: FERNANDO CERESO ARENAS Fecha Monitoreo: 20/06/2018 13:06:00

ID Encuesta: 167156 Ticket: 167189 Estatus: Validado

Proceso Electoral: Proceso Electoral Concurrente 2017-2018

Entidad:	CIUDAD DE MEXICO	UBICACIÓN	
Municipio:	COYOACAN	Latitud:	19.340852737426758
Proceso:	CAMPAÑA	Longitud:	-99.14363861083984
Ámbito:	LOCAL	Calle:	CALZADA DE TLALPAN
		Colonia:	ATLÁNTIDA
Hallazgo:	VALLAS	Número:	S/N
Otro Hallazgo:	NO APLICA		
Tamaño (metros):	ANCHO: 6.0 ALTO: 2.5	Código Postal:	04370
Cantidad:	1	Placas:	
Duración:			
Lema/Versión:	BANCOS DE ALIMENTOS PARA LOS QUE MENOS TIENEN	Entre Calle:	CIRCUNVALACIÓN
ID-INE:		Y Calle:	MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO
Tipo Beneficio:	DIRECTO	Referencia:	ESTACIÓN DE TREN LIGERO LAS TORRES

Información

Adicional:

BENEFICIADO(S):

No. 1

Fecha de Sincronización: 20/06/2018 13:06:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.

Usuario: FERNANDO CERESO ARENAS Fecha Monitoreo: 20/06/2018 13:06:00

ID Encuesta: 167156 Ticket: 167189 Estatus: Validado

Tipo Asociación:	PARTIDO
Beneficiado(s):	MARIANA BOY TAMBORRELL ()
Sujeto Obligado:	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Distritos Locales:	COYOACAN (26)
Cargo:	JEFE DE GOBIERNO



Fecha de Sincronización: 21/06/2018 12:21:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.
Usuario: TÁMARA RODRÍGUEZ CRUZ Fecha Monitoreo: 21/06/2018 12:21:00
ID Encuesta: 173870 Ticket: 173903 Estatus: Validado

Proceso Electoral: Proceso Electoral Concurrente 2017-2018

Entidad:	CIUDAD DE MEXICO	UBICACIÓN	
Municipio:	BENITO JUAREZ	Latitud:	19.388540267944336
Proceso:	CAMPAÑA	Longitud:	-99.13912963867188
Ámbito:	LOCAL	Calle:	CALZADA DE TLALPAN
		Colonia:	POSTAL
Hallazgo:	MUEBLES URBANOS	Número:	SN
Otro Hallazgo:	NO APLICA		
Tamaño (metros):	ANCHO: 1 ALTO: 1	Código Postal:	03410
Cantidad:	1	Placas:	
Duración:			
Lema/Versión:	MARIANA BOY, VOTA X VERDE	Entre Calle:	AHORRO PORTAL
ID-INE:		Y Calle:	CALZADA TLALPAN
Tipo Beneficio:	DIRECTO	Referencia:	PROPAGANDA EN PUESTO DE PERIÓDICOS

Información

Adicional:

BENEFICIADO(S):

No. 1	
Distritos Locales:	BENITO JUAREZ (17)
Cargo:	JEFE DE GOBIERNO

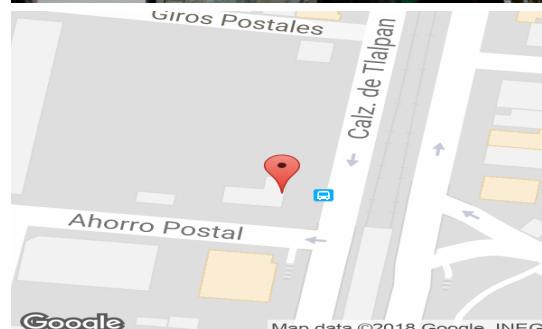
Fecha de Sincronización: 21/06/2018 12:21:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.

Usuario: TÁMARA RODRÍGUEZ CRUZ Fecha Monitoreo: 21/06/2018 12:21:00

ID Encuesta: 173870 Ticket: 173903 Estatus: Validado

Tipo Asociación:	PARTIDO
Sujeto Obligado:	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Beneficiado(s):	MARIANA BOY TAMBORRELL ()



Fecha de Sincronización: 21/06/2018 12:32:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.

Usuario: NATALIA IVONNE VARGAS BAUTISTA Fecha Monitoreo: 21/06/2018 12:32:00

ID Encuesta: 173906 Ticket: 173939 Estatus: Validado

Proceso Electoral: Proceso Electoral Concurrente 2017-2018

Entidad:	CIUDAD DE MEXICO	UBICACIÓN	
Municipio:	COYOACAN	Latitud:	19.32505989074707
Proceso:	CAMPAÑA	Longitud:	-99.11409759521484
Ámbito:	LOCAL	Calle:	EJE VIAL 3 ORIENTE
		Colonia:	CULHUACAN CTM VII
Hallazgo:	MUEBLES URBANOS	Número:	SN
Otro Hallazgo:	NO APLICA		
Tamaño (metros):	ANCHO: 1.0 ALTO: 3.0	Código Postal:	04440
Cantidad:	1	Placas:	
Duración:			
Lema/Versión:	INCENTIVOS A EMPRESAS QUE CONTRATEN JÓVENES	Entre Calle:	.
ID-INE:		Y Calle:	.
Tipo Beneficio:	DIRECTO	Referencia:	FRENTE AL PARQUE MARTRES DE CHICAGO

Información

Adicional:

BENEFICIADO(S):

No. 1

Fecha de Sincronización: 21/06/2018 12:32:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.

Usuario: NATALIA IVONNE VARGAS BAUTISTA Fecha Monitoreo: 21/06/2018 12:32:00

ID Encuesta: 173906 Ticket: 173939 Estatus: Validado

Distritos Locales:	COYOACAN (26)
Cargo:	JEFE DE GOBIERNO
Tipo Asociación:	PARTIDO
Sujeto Obligado:	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Beneficiado(s):	MARIANA BOY TAMBORRELL ()



Fecha de Sincronización: 21/06/2018 12:53:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.

Usuario: NATALIA IVONNE VARGAS BAUTISTA Fecha Monitoreo: 21/06/2018 12:53:00

ID Encuesta: 174926 Ticket: 174959 Estatus: Validado

Proceso Electoral: Proceso Electoral Concurrente 2017-2018

Entidad:	CIUDAD DE MEXICO	UBICACIÓN	
Municipio:	COYOACAN	Latitud:	19.322385787963867
Proceso:	CAMPAÑA	Longitud:	-99.11439514160156
Ámbito:	LOCAL	Calle:	AVENIDA CARLOTA ARMERO
		Colonia:	PILOTO V CULHUACAN
Hallazgo:	MUEBLES URBANOS	Número:	SN
Otro Hallazgo:	NO APLICA		
Tamaño (metros):	ANCHO: 1.0 ALTO: 3.0	Código Postal:	04480
Cantidad:	1	Placas:	
Duración:			
Lema/Versión:	PERMISO LABORAL PARA IR A LAS JUNTAS DE LA ESCUELA	Entre Calle:	MARIQUITA SAENZ
ID-INE:		Y Calle:	CERRADA
Tipo Beneficio:	DIRECTO	Referencia:	FRENTE A UNIDADES HABITACIONALES
Información Adicional:			
BENEFICIADO(S):			

No. 1

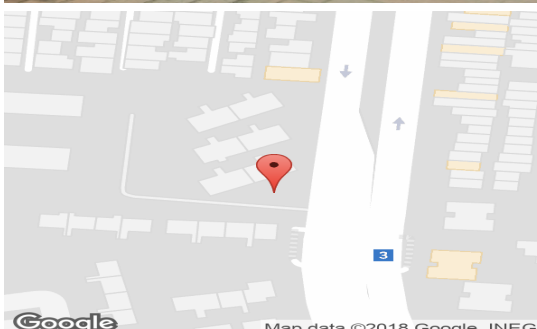
Fecha de Sincronización: 21/06/2018 12:53:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.

Usuario: NATALIA IVONNE VARGAS BAUTISTA Fecha Monitoreo: 21/06/2018 12:53:00

ID Encuesta: 174926 Ticket: 174959 Estatus: Validado

Distritos Locales:	COYOACAN (26)
Cargo:	JEFE DE GOBIERNO
Tipo Asociación:	PARTIDO
Sujeto Obligado:	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Beneficiado(s):	MARIANA BOY TAMBORRELL ()



Fecha de Sincronización: 21/06/2018 12:53:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.
Usuario: TÁMARA RODRÍGUEZ CRUZ Fecha Monitoreo: 21/06/2018 12:53:00
ID Encuesta: 175034 Ticket: 175067 Estatus: Validado

Proceso Electoral: Proceso Electoral Concurrente 2017-2018

Entidad:	CIUDAD DE MEXICO	UBICACIÓN	
Municipio:	BENITO JUAREZ	Latitud:	19.368270874023438
Proceso:	CAMPAÑA	Longitud:	-99.14214324951172
Ámbito:	LOCAL	Calle:	CALZADA DE TLALPAN
		Colonia:	PORTALES NORTE
Hallazgo:	MUEBLES URBANOS	Número:	SN
Otro Hallazgo:	NO APLICA		
Tamaño (metros):	ANCHO: 2 ALTO: 1	Código Postal:	03300
Cantidad:	1	Placas:	
Duración:			
Lema/Versión:	MARIANA BOY	Entre Calle:	MUNICIPIO LIBRE
ID-INE:		Y Calle:	VÍCTOR HUGO
Tipo Beneficio:	DIRECTO	Referencia:	PROPAGANDA EN PUESTO DE PERIODICOS

Información

Adicional:

BENEFICIADO(S):

No. 1	
Distritos Locales:	BENITO JUAREZ (17)
Cargo:	JEFE DE GOBIERNO
Tipo Asociación:	PARTIDO

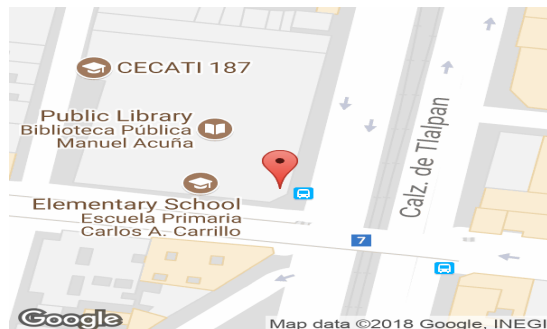
Fecha de Sincronización: 21/06/2018 12:53:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.

Usuario: TÁMARA RODRÍGUEZ CRUZ Fecha Monitoreo: 21/06/2018 12:53:00

ID Encuesta: 175034 Ticket: 175067 Estatus: Validado

Sujeto Obligado:	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Beneficiado(s):	MARIANA BOY TAMBORRELL ()



Fecha de Sincronización: 21/06/2018 12:55:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.
Usuario: LILIANA MOTA RAMIREZ Fecha Monitoreo: 21/06/2018 12:55:00
ID Encuesta: 175481 Ticket: 175514 Estatus: Validado

Proceso Electoral: Proceso Electoral Concurrente 2017-2018

Entidad:	CIUDAD DE MEXICO	UBICACIÓN	
Municipio:	ALVARO OBREGON	Latitud:	19.361875534057617
Proceso:	CAMPAÑA	Longitud:	-99.18382263183594
Ámbito:	LOCAL	Calle:	BARRANCA DEL MUERTO
		Colonia:	SAN JOSÉ INSURGENTES
Hallazgo:	MUEBLES URBANOS	Número:	SN
Otro Hallazgo:	NO APLICA		
Tamaño (metros):	ANCHO: 1.00 ALTO: 1.50	Código Postal:	03900
Cantidad:	1	Placas:	
Duración:			
Lema/Versión:	VOTA X VERDE	Entre Calle:	MINERVA
ID-INE:		Y Calle:	CIRCUITO INTERIOR
Tipo Beneficio:	DIRECTO	Referencia:	OFICINAS

Información

Adicional:

BENEFICIADO(S):

No. 1	
Beneficiado(s):	MARIANA BOY TAMBORRELL ()
Distritos Locales:	ALVARO OBREGON (18)
Cargo:	JEFE DE GOBIERNO

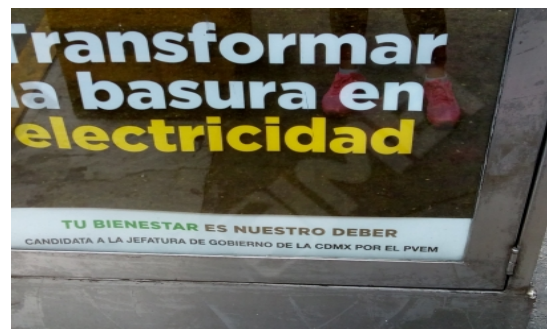
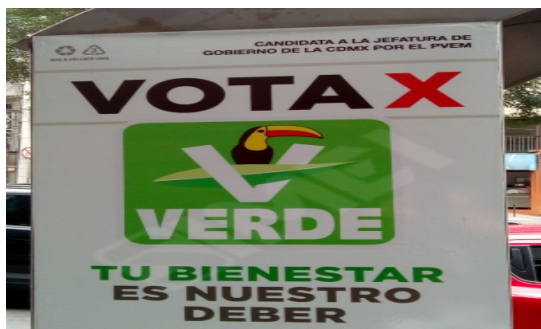
Fecha de Sincronización: 21/06/2018 12:55:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.

Usuario: LILIANA MOTA RAMIREZ Fecha Monitoreo: 21/06/2018 12:55:00

ID Encuesta: 175481 Ticket: 175514 Estatus: Validado

Tipo Asociación:	PARTIDO
Sujeto Obligado:	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

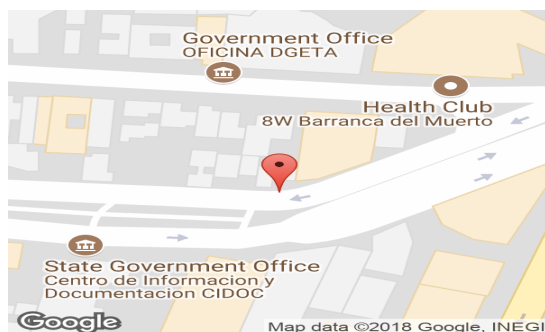


Fecha de Sincronización: 21/06/2018 12:55:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.

Usuario: LILIANA MOTA RAMIREZ Fecha Monitoreo: 21/06/2018 12:55:00

ID Encuesta: 175481 Ticket: 175514 Estatus: Validado



Fecha de Sincronización: 21/06/2018 13:33:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.
Usuario: LILIANA MOTA RAMIREZ Fecha Monitoreo: 21/06/2018 13:33:00
ID Encuesta: 176012 Ticket: 176045 Estatus: Validado

Proceso Electoral: Proceso Electoral Concurrente 2017-2018

Entidad:	CIUDAD DE MEXICO	UBICACIÓN	
Municipio:	ALVARO OBREGON	Latitud:	19.33843421936035
Proceso:	CAMPAÑA	Longitud:	-99.19456481933594
Ámbito:	LOCAL	Calle:	RIO DE LA MAGDALENA
		Colonia:	LORETO Y CAMPAMENTO
Hallazgo:	MUEBLES URBANOS	Número:	SN
Otro Hallazgo:	NO APLICA		
Tamaño (metros):	ANCHO: 1.00 ALTO: 1.50	Código Postal:	01000
Cantidad:	1	Placas:	
Duración:			
Lema/Versión:	VOTA X VERDE	Entre Calle:	AV REVOLUCIÓN
ID-INE:		Y Calle:	AV MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO
Tipo Beneficio:	DIRECTO	Referencia:	PLAZA COMERCIAL

Información

Adicional:

BENEFICIADO(S):

No. 1	
Tipo Asociación:	PARTIDO
Distritos Locales:	ALVARO OBREGON (18)

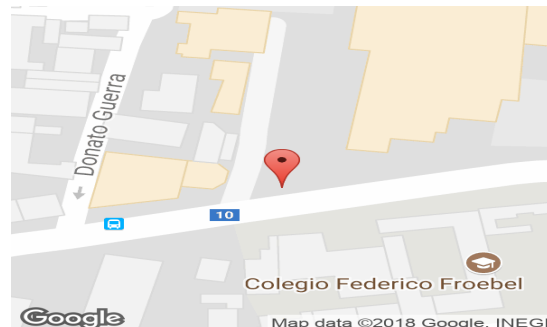
Fecha de Sincronización: 21/06/2018 13:33:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.

Usuario: LILIANA MOTA RAMIREZ Fecha Monitoreo: 21/06/2018 13:33:00

ID Encuesta: 176012 Ticket: 176045 Estatus: Validado

Cargo:	JEFE DE GOBIERNO
Sujeto Obligado:	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Beneficiado(s):	MARIANA BOY TAMBORRELL ()



Fecha de Sincronización: 21/06/2018 13:36:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.

Usuario: LILIANA MOTA RAMIREZ Fecha Monitoreo: 21/06/2018 13:36:00

ID Encuesta: 176087 Ticket: 176120 Estatus: Validado

Proceso Electoral: Proceso Electoral Concurrente 2017-2018

Entidad: CIUDAD DE MEXICO **UBICACIÓN**

Municipio: ALVARO OBREGON **Latitud:** 19.338285446166992

Proceso: CAMPAÑA **Longitud:** -99.1953125

Ámbito: LOCAL **Calle:** DONATO GUERRA

Colonia: PROGRESO TIZAPÁN

Hallazgo: MUEBLES URBANOS **Número:** SN

Otro Hallazgo: NO APLICA

Tamaño (metros): **ANCHO:** 1.00 **ALTO:** 1.50 **Código Postal:** 01000

Cantidad: 1 **Placas:**

Duración:

Lema/Versión: VOTA X VERDE **Entre Calle:** AV REVOLUCIÓN

ID-INE: **Y Calle:** AV MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO

Tipo Beneficio: DIRECTO **Referencia:** UNIDAD HABITACIONAL

Información Adicional: TRAE LA LEYENDA DE APOYO A JEFE DE GOBIERNO

BENEFICIADO(S):

No. 1	
Sujeto Obligado:	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Beneficiado(s):	MARIANA BOY TAMBORRELL ()
Distritos Locales:	ALVARO OBREGON (18)

Fecha de Sincronización: 21/06/2018 13:36:00

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.

Usuario: LILIANA MOTA RAMIREZ Fecha Monitoreo: 21/06/2018 13:36:00

ID Encuesta: 176087 Ticket: 176120 Estatus: Validado

Cargo:	JEFE DE GOBIERNO
Tipo Asociación:	PARTIDO



Encuesta	Ticket ID	ID-INE	Ubicación	Ancho(Metros)	Alto (Metros)	Lema o Versión	Se anexa en SIF	Clave de Ubicación	Ref.	Hallazgo	Importe Matriz de precio	Otros candidatos	Mariana Boy
127865	127898		Luis Murillo bosques de Teclameya s/n c.p.04730	3	3	BOY ACREAR BANCOS DE ALIMENTOS CONTRA ELAMBRE	Se encuentra registrado en la PN 3 DR-05	KDF-109	(1)				
130675	130708		Calle Chimalpopoca s/n centra	C	2	POR MAYOR VIGILANCIA EN RUTAS DE TRANSPORTE Y ESCUELAS PUBLICAS	Se encuentra registrado en la PN 3 DR-05	KDF-005	(1)				
131291	131324		Eje Central Lázaro Cárdenas col. obrera	2	2	POR MAYOR VIGILANCIA EN RUTAS DE TRANSPORTE Y ESCUELAS PUBLICAS	Se encuentra registrado en la PN 3 DR-05	KDF-080	(1)				
133169	133202		Ermila Iztlapalapa col. San c	2	22	VOTA POR VERDE	Se encuentra registrado en la PN 3 DR-05	KDF-112	(1)				
137189	137222		Calzada de las aguilas, San Clemente norte s/n	1	1	VAMOS POR PENA DE MUERTE A SECUESTRADORES Y ASESINOS c.p. 0140	Se encuentra registrado en la PN 3 DR-36	AO065	(1)				

Encuesta	Ticket ID	ID-INE	Ubicación	Ancho(Metros)	Alto (Metros)	Lema o Versión	Se anexa en SIF	Clave de Ubicación	Ref.	Hallazgo	Importe Matriz de precio	Otros candidatos	Mariana Boy
137828	137951		Av. Ejército nacional col. Granada	3	3	BOY AAHORRARTE EN TRANSPORTE CON TARGETAS DE PREPAGO	Se encuentra registrado en la PN 1 DR-36		(2)	Kiosco	17,250.00	0.00	17,250.00
137896	137929		Av. Del te bramadero ramos Milidín	3	2	BOY A AHORRARTE EN TRANSPORTE CON TARJETA DE PREPAGO	Se encuentra registrado en la PN 1 DR-36		(2)	Valla	4,666.67	0.00	4,666.67
138829	138862		Rey Cuauhtemoc San Angel Col. Dr. Galvez	3	6	BOY ACREAR BANCOS DE ALIMENTOS CONTRA EL HAMBRE	Se encuentra registrado en la PN 3 DR-05	KDF-082	(1)				
139256	139289		Periférico Boulevard Manuel Avila Camacho, Col. Irrigation	2	2	SIN LEYENDA	Se encuentra registrado en la PN 1 DR-36		(2)	Kiosco	17,250.00	0.00	17,250.00
139912	139945		Calzada Guadalupe col. Guadalupe Tepeyac	1.5	2.5	VOY A ACABAR CON LAS CONSTRUCCIONES IRREGULAR	Se encuentra registrado en la PN 3 DR-05	KDF-061	(1)				

Encuesta	Ticket ID	ID-INE	Ubicación	Ancho(Metros)	Alto (Metros)	Lema o Versión	Se anexa en SIF	Clave de Ubicación	Ref.	Hallazgo	Importe Matriz de precio	Otros candidatos	Mariana Boy
139934	139967		Calzada de Tlalpan, el centinela	6	2.25	BOY A INCENTIVAR A EMPRESAS QUE CONTRATEN JOVENES	Se encuentra registrado en la PN 2 DR-30		(2)	Valla	4,666.66	0.00	4,666.66
140314	140347		Calzada de Tlalpan, el centinela	1.5	2	BOY POR MAYOR VIGILANCIA EN TRANSPORTE Y ESCUELAS PUBLICAS	Se encuentra registrado en la PN 1 DR-36		(2)	Valla	4,666.66	0.00	4,666.66
141116	141129		RETORNO 1 CUR 28, COL AGRICOLA ORIENTAL	3	2	BOY ACREAR BANCOS DE ALIMENTOS CONTRA EL HAMBRE	Se encuentra registrado en la PN 2 DR-34		(2)	Valla	4,666.66	0.00	4,666.66
143511	143544		RIO DE LA MAGDALENA S/N, COL. LORETO CAMPAMENTO	1.5	2.5	TU BIENESTARES NUESTRO DEBER	Se encuentra registrado en la PN 2 DR-34 '		(2)	Caseta	13,966.40	10,474.80	3,491.60
143587	143620		EJE VIAL 10 SUR COL. PROGRESO TIZAPAN	1.5	2.5	LOGRAREMOS UNA CADENA PERPETUA A SECUESTRADORES/ VAMOS POR PENA DE MUERTE A SECUESTRADORES VASCOINOC	Se encuentra registrado en la PN 2 DR-34		(2)	Caseta	13,966.40	10,474.80	3,491.60

Encuesta	Ticket ID	ID-INE	Ubicación	Ancho(Metros)	Alto (Metros)	Lema o Versión	Se anexa en SIF	Clave de Ubicación	Ref.	Hallazgo	Importe Matriz de precio	Otros candidatos	Mariana Boy
144050	144083		RIO DE LA MAGDALENA COL. PROGRESO TIZAPAN	1.5	2.5	VAMOS POR PENA DE MUERTE A SECUESTRADORES YASESINOS	Se encuentra registrado en la PN 2 DR-34		(2)	Caseta	13,966.40	10,474.80	3,491.60
155668	155701		AV CONSTITUYENTES S/N Col. San Miguel Chapultepec	7	3	REPARAR LA FUGAS AS I HABRA AGUA PARA TODOS	Se encuentra registrado en la PN 03 DR-10	05082-V03	(1)				
163833	163866		Catizada Tlalpan s/n, Prado Coyoacan	6.8	2.5	BOY A CREAR BANCO DE ALIMENTOS CONTRA EL AMBRE	Se encuentra registrado en la PN 1 DR-36		(2)	Valla	4,666.67	0.00	4,666.67
164107	164140		Catizada Tlalpan. Col. Emiliano Zapata	6	2.52	BOY A CREAR BANCOS DE ALIMENTOS CONTRA EL AMBRE	Se encuentra registrado en la PN 2 DR-30		(2)	Valla	4,666.67	0.00	4,666.67
164305	16433		Catizada Tlalpan. Col. avante	6	2.5	BOY A REPARAR LAS FUGAS ASIHABRA AGUA PARA TODOS	Se encuentra registrado en la PN 1 DR-36		(2)	Valla	4,666.67	0.00	4,666.67

Encuesta	Ticket ID	ID-INE	Ubicación	Ancho(Metros)	Alto (Metros)	Lema o Versión	Se anexa en SIF	Clave de Ubicación	Ref.	Hallazgo	Importe Matriz de precio	Otros candidatos	Mariana Boy
164536	164569		Calzada Tlalpan, Col. Campestre Churubusco	6.8	2.5	PERMISO LABORAL PARA ASISTIR A REUNIONES ESCOLARES	Se encuentra registrado en la PN 1 DR-36		(2)	Valla	4,666.67	0.00	4,666.67
167156	167189		Calzada Tlalpan, Col. Atlantida	6	2.5	BANCOS DE ALIMENTOS PARA LOS QUE MENOS TIENEN	Se encuentra registrado en la PN 1 DR-36		(2)	Valla	4,666.67	0.00	4,666.67
173870	173903		Calzada Tlalpan, Col. Postal	1	1	MARIANA BOY, VOTA X VERDE	Se encuentra registrado en la PN 3 DR-05	KDF-102	(1)				
173906	173939		Eje vial 3 oriente S/N, Culhuacán Cdm VII	1	3	INCENTIVOS A EMPRESAS QUE CONTRATEN JÓVENES	Se encuentra registrado en la PN 2 DR-38	COY052	(1)				
174926	174959		Av. Carlota Armero Col. Piloto V Culhuacán	1	3	PERMISO LABORAL PARA IR A LAS JUNTAS DE LA ESCUELA	Se encuentra registrado en la PN 3 DR-10	V0176-02	(1)				

Encuesta	Ticket ID	ID-INE	Ubicación	Ancho(Metros)	Alto (Metros)	Lema o Versión	Se anexa en SIF	Clave de Ubicación	Ref.	Hallazgo	Importe Matriz de precio	Otros candidatos	Mariana Boy
175034	175067		Calzada de Tlalpan s/n, Col. Portales	2	1	MARIANA BOY	Se encuentra registrado en la PN 3 DR-05	KDF-102	(1)				
175481	175514		Barranca del Muerto, Col San Jose	1	1.5	VOTAX VERDE	Se encuentra registrado en la PN 2 DR-34		(2)	Caseta	13,966.40	10,474.80	3,491.60
176012	176045		Rio de la Magdalena, Col. Loreto y Campamento	1	1.5	VOTA X VERDE	Se encuentra registrado en la PN 3 DR-38 ~	AO079	(1)				
176087	176120		Donato Guerra s/n, Progreso Tizapan	1	1.5	VOTA X VERDE	Se encuentra registrado en la PN2 DR-34		(2)	Caseta	13,966.40	10,474.80	3,491.60
											146,332.00	52,374.00	93,958.00



UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PARTIDOS POLÍTICOS, AGRUPACIONES POLÍTICAS Y OTROS
PROCESO FEDERAL ELECTORAL ORDINARIO Y LOCALES CONCURRENTES 2017-2018
ANEXO II - GASTOS

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

PROCESO	AMBITO	PROCESO ELECTORAL	ESTADO ELECCION	SUBNIVEL ENTIDAD	ID CONTABILIDAD	CARGO	SUJETO OBLIGADO	SIGLAS	TIPO ASOCIACIÓN	RFC	NOMBRE CANDIDATO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD-MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	40993	JEFE DE GOBIERNO	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	BOTM761219HP9	MARIANA
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD-MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	Distrito 6-GUSTAVO A. MADERO	47505	DIPUTADO LOCAL MR.	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	MOTM851115KT2	MIGUEL ALBERTO
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD-MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	Distrito 7-MILPA ALTA	47551	DIPUTADO LOCAL MR.	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	FOFT880723GL4	TANIA ITZEL
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD-MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	Distrito 8-TLAHUAC	47543	DIPUTADO LOCAL MR.	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	RAAT880323CA7	TERESA
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD-MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	Distrito 9-CUAUHTEMOC	47546	DIPUTADO LOCAL MR.	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	SIOE750329C34	EUNICE
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD-MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	Distrito 10-VENUSTIANO CARRANZA	47509	DIPUTADO LOCAL MR.	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	HEG1800114X07	IVAN SALVADOR SAHJID
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD-MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	Distrito 2-GUSTAVO A. MADERO	47557	DIPUTADO LOCAL MR.	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	ROMA661230BH1	ARTURO
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD-MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	Distrito 11-IZTACALCO	47540	DIPUTADO LOCAL MR.	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	AUMC670910FRA	MARÍA DEL CARMEN
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD-MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	Distrito 12-CUAUHTEMOC	47515	DIPUTADO LOCAL MR.	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	UAMN911228355	VICTOR MANUEL
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD-MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	Distrito 13-MIGUEL HIDALGO	47511	DIPUTADO LOCAL MR.	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	SIME681015G98	ESTHER
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD-MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	Distrito 14-TLALPÁN	47548	DIPUTADO LOCAL MR.	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	GUME711005S09	EDUARDO GRECO

CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD.MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	Distrito 15-IZTACALCO	47547	DIPUTADO LOCAL MR	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	OIG5750111GF7	SONIA DALIA
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD.MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	Distrito 16-TLALPAN	47550	DIPUTADO LOCAL MR	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	MEA880606RY9	ANGEL NOE
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD.MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	Distrito 17-BENITO JUAREZ	47558	DIPUTADO LOCAL MR	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	DEESE670924TIA	EMMANUEL OCTAVIO
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD.MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	Distrito 18-ALVARO OBREGON	47516	DIPUTADO LOCAL MR	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	CUHM940413U02	MARIO GUILLERMO
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD.MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	Distrito 19-XOCHIMILCO	47553	DIPUTADO LOCAL MR	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	PECF730717H19	PAULA ALEJANDRA
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD.MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	Distrito 20-CUAIMALPA DE MORELOS	47545	DIPUTADO LOCAL MR	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	RIPK7910157J6	KARLE EMRET
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD.MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	Distrito 21-IZTAPALAPA	47513	DIPUTADO LOCAL MR	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	MORG650212Q80	MARIA GUADALUPE
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD.MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	Distrito 22-IZTAPALAPA	47506	DIPUTADO LOCAL MR	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	GAGF770228N14	FATIMA NAYELI
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD.MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	Distrito 23-ALVARO OBREGON	47542	DIPUTADO LOCAL MR	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	CEOD820315VA3	DIANA IVETH
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD.MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	Distrito 24-IZTAPALAPA	47514	DIPUTADO LOCAL MR	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	GARL641107H11	LONGINOS
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD.MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	Distrito 25-XOCHIMILCO	47508	DIPUTADO LOCAL MR	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	FEVZ7607228M8	ZULY
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD.MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	Distrito 1-GUSTAVO A. MADERO	47544	DIPUTADO LOCAL MR	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	VAGE791128MA5	ELIZABETH
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD.MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	Distrito 26-COYOACAN	47541	DIPUTADO LOCAL MR	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	PEKG410817RA7	GUADALUPE AURORA
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD.MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	Distrito 27-IZTAPALAPA	47512	DIPUTADO LOCAL MR	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	TEM930921H1K2	ARIANA
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD.MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	Distrito 28-IZTAPALAPA	47538	DIPUTADO LOCAL MR	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	ZAVG701128623	GERMAN

CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD-MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	Distrito 29-IZTAPALAPA	47507	DIPUTADO LOCAL MR	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	HEHE760405297	ERIC RICARDO
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD-MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	Distrito 30-COYOACAN	47549	DIPUTADO LOCAL MR	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	CU51810527UJ8	ISAAC ALEJANDRO
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD-MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	Distrito 31-IZTAPALAPA	47539	DIPUTADO LOCAL MR	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	VIC830404KX5	ARACELI
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD-MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	Distrito 32-COYOACAN	47510	DIPUTADO LOCAL MR	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	SEMP760601893	PEDRO
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD-MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	Distrito 33-LA MAGDALENA CONTRERAS	47537	DIPUTADO LOCAL MR	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	MOLR7311165H1	RICARDO DAMIAN
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD-MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	Distrito 3-AZCAPOTZALCO	47554	DIPUTADO LOCAL MR	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	CAB8003117E2	JUAN PABLO
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD-MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	Distrito 4-GUSTAVO A. MADERO	47556	DIPUTADO LOCAL MR	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	BALN900326ISA	NORMA JULIETA
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD-MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	Distrito 5-AZCAPOTZALCO	47555	DIPUTADO LOCAL MR	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	TAGM781212F59	MARIO ANTONIO
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD-MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	TLALPAN	47522	ALCALDE	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	AKAS8061008N2	ALFREDO
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD-MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	XOCHIMILCO	47523	ALCALDE	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	LEHE750605377	EVA ELOISA
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD-MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	VENUSTIANO CARRANZA	47524	ALCALDE	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	LAEF740308SR9	JULIETA
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD-MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	CUAHIMILPA DE MORELOS	47525	ALCALDE	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	ROHJ790217981	JAZMIN CITLALI
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD-MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	ALVARO OBREGON	47526	ALCALDE	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	HUHL790605AU3	LILIANA DEL CARMEN
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD-MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	COYOACAN	47527	ALCALDE	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	RUGF7305058GA	FERNANDO
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD-MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	TLAHUAC	47528	ALCALDE	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	DU4M50131IV9	ALEJANDRO

CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD.MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	GUSTAVO A. MADERO	47529	ALCALDE	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	GORF6504178E8	FERNANDO
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD.MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	LA MAGDALENA CONTRERAS	47530	ALCALDE	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	OESM9201176Z7	MARIANA AIDEE
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD.MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	IZTACALCO	47533	ALCALDE	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	AIVA700410X8	ALFREDO ALEJANDRO
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD.MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	MILPA ALTA	47534	ALCALDE	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	MAGM651106H G7	MARIA DEL ROSARIO
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD.MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUAREZ	47535	ALCALDE	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	GUCA690413TB4	ANDRES MARTIN
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD.MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	AZCAPOTZALCO	47536	ALCALDE	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	ZASL550722LY2	JOSE LUIS
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD.MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	CUAUHTEMOC	47532	ALCALDE	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	SIOAS311208N3	ANTONIO
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD.MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	IZTAPALAPA	47531	ALCALDE	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	PESA840802DB4	MA. DE LOS ÁNGELES
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-CD.MX-01 JUL 2018	CIUDAD DE MEXICO	MIGUEL HIDALGO	47577	ALCALDE	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	PVEM	CC	OICL800521EA6	LUZ ELIZABETH

							GASTOS REPORTADOS						
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	FECHA INICIO PERIODO	FECHA FIN PERIODO	PERIODO	ETAPA DEL INFORME	FECHA HORA DE PRESENTACIÓN	PROPAGANDA	PROPAGANDA UTILITARIA	OPERATIVOS DE LA CAMPAÑA	PROPAGANDA EXHIBIDA EN SALAS DE CINE	PROPAGANDA EXHIBIDA EN PÁGINAS DE INTERNET	PROPAGANDA EN DIARIOS, REVISTAS Y OTROS MEDIOS IMPRESOS	PRODUCCIÓN DE MENSAJES PARA RADIO Y T.V.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
BOY	TAMBORELL	30/03/2018	27/06/2018	3	CORRECCIÓN	01/06/2018 19:34	\$ 1,477,546.09	\$ 5,486.80	\$ 2,785,414.20	\$ -	\$ 3,062,793.46	\$ 173,750.02	\$ -
MORALES	TOVAR	29/04/2018	27/06/2018	2	CORRECCIÓN	01/06/2018 19:34	\$ 13,109.62	\$ 121,768.14	\$ 24,664.83	\$ -	\$ 75,785.38	\$ -	\$ -
FLORES	FLORES	29/04/2018	27/06/2018	3	CORRECCIÓN	02/06/2018 19:34	\$ 12,917.73	\$ 121,768.14	\$ 36,475.12	\$ -	\$ 53,375.82	\$ -	\$ -
RAMOS	ARREOLA	29/04/2018	27/06/2018	4	CORRECCIÓN	03/06/2018 19:34	\$ 13,637.93	\$ 121,768.14	\$ 36,246.01	\$ -	\$ 50,784.89	\$ -	\$ -
SIERRA	O CAMPO	29/04/2018	27/06/2018	5	CORRECCIÓN	04/06/2018 19:34	\$ 12,979.55	\$ 121,768.14	\$ 30,231.60	\$ -	\$ 60,595.93	\$ -	\$ -
HERNANDEZ	GARCIA	29/04/2018	27/06/2018	6	CORRECCIÓN	05/06/2018 19:34	\$ 13,030.89	\$ 121,768.14	\$ 24,644.83	\$ -	\$ 66,591.40	\$ -	\$ -
RODRIGUEZ	MUÑOZ	29/04/2018	27/06/2018	7	CORRECCIÓN	06/06/2018 19:34	\$ 13,032.85	\$ 121,768.14	\$ 24,645.33	\$ -	\$ 66,820.03	\$ -	\$ -
AGUILAR	MERAZ	29/04/2018	27/06/2018	8	CORRECCIÓN	07/06/2018 19:34	\$ 13,036.01	\$ 121,768.14	\$ 24,646.13	\$ -	\$ 67,189.26	\$ -	\$ -
VAZQUEZ	MAULEN	29/04/2018	27/06/2018	9	CORRECCIÓN	08/06/2018 19:34	\$ 13,016.95	\$ 121,768.14	\$ 30,644.70	\$ -	\$ 64,963.36	\$ -	\$ -
SITT	MORHAIM	29/04/2018	27/06/2018	10	CORRECCIÓN	09/06/2018 19:34	\$ 12,924.54	\$ 121,768.14	\$ 24,674.86	\$ -	\$ 54,172.62	\$ -	\$ -
GUTIERREZ	MENDEZ	29/04/2018	27/06/2018	11	CORRECCIÓN	10/06/2018 19:34	\$ 12,938.49	\$ 121,768.14	\$ 24,836.05	\$ -	\$ 55,801.44	\$ -	\$ -

ORTIZ	GUERRERO	29/04/2018	27/06/2018	12	CORRECCIÓN	11/06/2018 19:34	\$ 13,026.69	\$ 121,768.14	\$ 24,643.76	\$ -	\$ 66,100.49	\$ -	\$ -
MENDOZA	ARZATE	29/04/2018	27/06/2018	13	CORRECCIÓN	12/06/2018 19:34	\$ 13,000.63	\$ 121,768.14	\$ 24,637.15	\$ -	\$ 63,058.08	\$ -	\$ -
DESCALZO	SARACHO	29/04/2018	27/06/2018	14	CORRECCIÓN	13/06/2018 19:34	\$ 12,991.64	\$ 121,768.14	\$ 27,534.86	\$ -	\$ 62,007.94	\$ -	\$ -
CUERVAS	HUESCA	29/04/2018	27/06/2018	15	CORRECCIÓN	14/06/2018 19:34	\$ 3,812.09	\$ 121,768.14	\$ 24,645.64	\$ -	\$ 66,964.31	\$ -	\$ -
PEREZ	CORDOVA	29/04/2018	27/06/2018	16	CORRECCIÓN	15/06/2018 19:34	\$ 12,934.90	\$ 121,768.14	\$ 26,943.89	\$ -	\$ 55,382.54	\$ -	\$ -
RIVERA	PEÑA	29/04/2018	27/06/2018	17	CORRECCIÓN	16/06/2018 19:34	\$ 13,025.45	\$ 121,768.14	\$ 24,643.45	\$ -	\$ 65,955.95	\$ -	\$ -
MORENO	REBOLLO	29/04/2018	27/06/2018	18	CORRECCIÓN	17/06/2018 19:34	\$ 12,919.24	\$ 121,768.14	\$ 25,266.02	\$ -	\$ 53,553.21	\$ -	\$ -
GARCIA	GARCIA	29/04/2018	27/06/2018	19	CORRECCIÓN	18/06/2018 19:34	\$ 12,902.12	\$ 124,346.66	\$ 25,281.81	\$ -	\$ 51,554.63	\$ -	\$ -
CENOBIO	OLMEDO	29/04/2018	27/06/2018	20	CORRECCIÓN	19/06/2018 19:34	\$ 13,042.70	\$ 121,768.14	\$ 24,647.83	\$ -	\$ 67,970.03	\$ -	\$ -
GARCIA	RIOS	29/04/2018	27/06/2018	21	CORRECCIÓN	20/06/2018 19:34	\$ 13,028.58	\$ 121,768.14	\$ 25,448.65	\$ -	\$ 66,320.98	\$ -	\$ -
FERIA	VALENCIA	29/04/2018	27/06/2018	22	CORRECCIÓN	21/06/2018 19:34	\$ 12,944.04	\$ 121,547.74	\$ 29,584.59	\$ -	\$ 56,448.98	\$ -	\$ -
VAZQUEZ	GARCIA	29/04/2018	27/06/2018	23	CORRECCIÓN	22/06/2018 19:34	\$ 12,968.16	\$ 121,768.14	\$ 24,630.17	\$ -	\$ 59,849.32	\$ -	\$ -
PEREZ	KUHN	29/04/2018	27/06/2018	24	CORRECCIÓN	23/06/2018 19:34	\$ 12,972.54	\$ 121,547.74	\$ 24,630.01	\$ -	\$ 59,777.31	\$ -	\$ -
TEXCOCANO	MENDEZ	29/04/2018	27/06/2018	25	CORRECCIÓN	24/06/2018 19:34	\$ 12,926.43	\$ 121,547.74	\$ 25,278.03	\$ -	\$ 54,392.32	\$ -	\$ -
ZAMITZ	VAZQUEZ	29/04/2018	27/06/2018	26	CORRECCIÓN	25/06/2018 19:34	\$ 12,916.53	\$ 121,547.74	\$ 25,261.50	\$ -	\$ 53,236.80	\$ -	\$ -

HERNANDEZ	HERNANDEZ	29/04/2018	27/06/2018	27	CORRECCIÓN	26/06/2018 19:34	\$ 12,912.22	\$ 121,547.74	\$ 24,695.81	\$ -	\$ 52,733.54	\$ -	\$ -
CUNILLE	SILVA	29/04/2018	27/06/2018	28	CORRECCIÓN	27/06/2018 19:34	\$ 12,959.28	\$ 121,820.92	\$ 24,626.64	\$ -	\$ 58,229.17	\$ -	\$ -
VILCHIS	CAZARES	29/04/2018	27/06/2018	29	CORRECCIÓN	28/06/2018 19:34	\$ 12,916.35	\$ 121,820.92	\$ 25,300.58	\$ -	\$ 53,214.98	\$ -	\$ -
SERRANO	MEJIA	29/04/2018	27/06/2018	30	CORRECCIÓN	29/06/2018 19:34	\$ 13,015.07	\$ 121,820.92	\$ 24,640.81	\$ -	\$ 64,743.66	\$ -	\$ -
MORA	LOPEZ	29/04/2018	27/06/2018	31	CORRECCIÓN	30/06/2018 19:34	\$ 12,900.80	\$ 123,996.68	\$ 24,611.79	\$ -	\$ 51,399.05	\$ -	\$ -
CARDENAS	BACA	29/04/2018	27/06/2018	32	CORRECCIÓN	01/07/2018 19:34	\$ 12,987.66	\$ 121,768.14	\$ 24,633.85	\$ -	\$ 76,373.91	\$ -	\$ -
BAUTISTA	LOPEZ	29/04/2018	27/06/2018	33	CORRECCIÓN	02/07/2018 19:34	\$ 22,850.81	\$ 121,768.14	\$ 31,019.96	\$ -	\$ 71,983.75	\$ -	\$ -
TALAVERA	GARCIA	29/04/2018	27/06/2018	34	CORRECCIÓN	03/07/2018 19:34	\$ 13,038.67	\$ 121,768.14	\$ 24,646.81	\$ -	\$ 67,499.36	\$ -	\$ -
ADAME	VON KNOOP	29/04/2018	27/06/2018	35	CORRECCIÓN	04/07/2018 19:34	\$ 14,157.97	\$ 121,768.14	\$ 38,051.35	\$ -	\$ 19,852.69	\$ -	\$ -
LESCAS	HERNANDEZ	29/04/2018	27/06/2018	36	CORRECCIÓN	05/07/2018 19:34	\$ 13,713.20	\$ 121,768.14	\$ 54,900.53	\$ -	\$ 12,556.13	\$ -	\$ -
LAGARDE	ESTRADA	29/04/2018	27/06/2018	37	CORRECCIÓN	06/07/2018 19:34	\$ 13,857.69	\$ 121,768.14	\$ 34,831.08	\$ -	\$ 14,926.35	\$ -	\$ -
RODRIGUEZ	HUERTA	29/04/2018	27/06/2018	38	CORRECCIÓN	07/07/2018 19:34	\$ 16,577.99	\$ 121,768.14	\$ 32,441.16	\$ -	\$ 5,888.56	\$ -	\$ -
HUITRON	HERNANDEZ	29/04/2018	27/06/2018	39	CORRECCIÓN	08/07/2018 19:34	\$ 14,309.19	\$ 354,000.14	\$ 34,945.76	\$ -	\$ 22,333.67	\$ -	\$ -
RUIZ	GOMEZ	29/04/2018	27/06/2018	40	CORRECCIÓN	09/07/2018 19:34	\$ 14,217.30	\$ 121,768.14	\$ 34,922.43	\$ -	\$ 20,826.22	\$ -	\$ -
DUARAN	RAÑA	29/04/2018	27/06/2018	41	CORRECCIÓN	10/07/2018 19:34	\$ 13,605.83	\$ 121,768.14	\$ 76,767.17	\$ -	\$ 10,794.67	\$ -	\$ -

GOMEZ	RODRIGUEZ	29/04/2018	27/06/2018	42	CORRECCIÓN	11/07/2018 19:34	\$ 15,683.91	\$ 356,320.14	\$ 62,253.45	\$ -	\$ 38,554.72	\$ -	\$ -
ORTEGA	SEGOVIA	29/04/2018	27/06/2018	43	CORRECCIÓN	12/07/2018 19:34	\$ 14,787.89	\$ 121,768.14	\$ 32,461.79	\$ -	\$ 7,220.83	\$ -	\$ -
AGISS	VELAZQUEZ	29/04/2018	27/06/2018	44	CORRECCIÓN	13/07/2018 19:34	\$ 13,747.65	\$ 121,768.14	\$ 32,553.65	\$ -	\$ 13,154.11	\$ -	\$ -
MARRUFO	GARCIA	29/04/2018	27/06/2018	45	CORRECCIÓN	14/07/2018 19:34	\$ 11,337.42	\$ 115,494.86	\$ 26,059.42	\$ -	\$ 3,838.43	\$ -	\$ -
GUZMAN	CASTILLO	29/04/2018	27/06/2018	46	CORRECCIÓN	15/07/2018 19:34	\$ 17,198.58	\$ 77,021.72	\$ 32,559.91	\$ -	\$ 13,558.82	\$ -	\$ -
ZANELA	SIERRA	29/04/2018	27/06/2018	47	CORRECCIÓN	16/07/2018 19:34	\$ 13,797.80	\$ 121,768.14	\$ 32,565.88	\$ -	\$ 13,944.00	\$ -	\$ -
SILVA	OROPEZA	29/04/2018	27/06/2018	48	CORRECCIÓN	17/07/2018 19:34	\$ 14,023.05	\$ 129,888.14	\$ 44,226.32	\$ -	\$ 17,639.30	\$ -	\$ -
PÉREZ	SÁNCHEZ	29/04/2018	27/06/2018	49	CORRECCIÓN	18/07/2018 19:34	\$ 16,244.77	\$ 354,000.14	\$ 38,188.56	\$ -	\$ 54,087.96	\$ -	\$ -
ORTIZ	CASTILLO	29/04/2018	27/06/2018	50	CORRECCIÓN	19/07/2018 19:34	\$ 10,242.56	\$ 121,768.14	\$ 32,621.04	\$ -	\$ 11,795.15	\$ -	\$ -
							\$ 2,134,666.05	\$ 6,632,105.36	\$ 4,294,726.77	\$ -	\$ 5,358,595.51	\$ 173,750.02	\$ -

			DETERMINADOS UTF			TOTAL DE GASTOS DETERMINADOS POR AUDITORÍA	AJUSTES DETERMINADOS ACATAMIENTO SUP-RAP-279/2018 (AUMENTO / DISMINUCIÓN)	TOTAL DE GASTOS	TOPE DE GASTOS	DIFERENCIA TOPE- GASTO	% GASTOS - TOPE
PROPAGANDA EN VÍA PÚBLICA	FINANCIEROS	TOTAL DE GASTOS REPORTADOS	DIFERENCIA DE PRORRATEO	TOTAL DE GASTOS NO REPORTADOS (ANEXO XX)	AJUSTES DETERMINADOS UTF (AUMENTO / DISMINUCIÓN)						
27	28	29= (20 A 28)	30	31	32	33 = (30 + 31 + 32)	34	35= (29 + 33) 34	36	37 = (36-35)	38
\$ 22,709,357.14	\$ 315.52	\$ 30,214,663.23	\$ -	\$ 654,681.67		\$ 654,681.67	\$ (300,000.00)	\$ 30,569,344.90	\$30,259,504.80	\$ (309,840.10)	101.02%
\$ 47,516.42	\$ 487.20	\$ 283,331.59	\$ -	\$ 51,077.90		\$ 51,077.90		\$ 334,409.49	\$764,409.40	\$ 429,999.91	43.75%
\$ 33,465.92	\$ 487.20	\$ 258,489.93	\$ -	\$ 34.09		\$ 34.09		\$ 258,524.02	\$538,375.32	\$ 279,851.30	48.02%
\$ 31,841.45	\$ 487.20	\$ 254,765.62	\$ -	\$ 26.22		\$ 26.22		\$ 254,791.84	\$512,241.97	\$ 257,450.13	49.74%
\$ 37,992.83	\$ 487.20	\$ 264,055.25	\$ -	\$ 5.20		\$ 5.20		\$ 264,060.45	\$611,200.95	\$ 347,140.50	43.20%
\$ 41,751.91	\$ 487.20	\$ 268,274.37	\$ -	\$ 8.97		\$ 8.97		\$ 268,283.34	\$671,674.28	\$ 403,390.94	39.94%
\$ 41,895.27	\$ 487.20	\$ 268,648.82	\$ -	\$ 12.26		\$ 12.26		\$ 268,661.08	\$673,980.39	\$ 405,319.31	39.86%
\$ 42,126.77	\$ 487.20	\$ 269,253.51	\$ -	\$ 48.47		\$ 48.47		\$ 269,301.98	\$677,704.64	\$ 408,402.66	39.74%
\$ 40,731.16	\$ 487.20	\$ 271,611.51	\$ -	\$ -		\$ -		\$ 271,611.51	\$655,253.12	\$ 383,641.61	41.45%
\$ 33,965.51	\$ 487.20	\$ 247,992.87	\$ -	\$ 9.98		\$ 9.98		\$ 248,002.85	\$546,412.27	\$ 298,409.42	45.39%
\$ 34,986.76	\$ 487.20	\$ 250,818.08	\$ -	\$ 37.66		\$ 37.66		\$ 250,855.74	\$562,841.38	\$ 311,985.64	44.57%

\$ 41,444.12	\$ 487.20	\$ 267,470.40	\$ -	\$ 59.02		\$ 59.02		\$ 267,529.42	\$666,722.75	\$ 399,193.33	40.13%
\$ 39,536.58	\$ 487.20	\$ 262,487.78	\$ -	\$ 48.10		\$ 48.10		\$ 262,535.88	\$636,035.47	\$ 373,499.59	41.28%
\$ 38,878.15	\$ 487.20	\$ 263,667.93	\$ -	\$ 69.87		\$ 69.87		\$ 263,737.80	\$625,443.22	\$ 361,705.42	42.17%
\$ 41,985.73	\$ 487.20	\$ 259,663.11	\$ -	\$ 29.51		\$ 29.51		\$ 259,692.62	\$675,435.64	\$ 415,743.02	38.45%
\$ 34,724.11	\$ 487.20	\$ 252,240.78	\$ -	\$ 100.92		\$ 100.92		\$ 252,341.70	\$558,616.15	\$ 306,274.45	45.17%
\$ 41,353.50	\$ 487.20	\$ 267,233.69	\$ -	\$ 11.29		\$ 11.29		\$ 267,244.98	\$665,264.86	\$ 398,019.88	40.17%
\$ 33,577.15	\$ 487.20	\$ 247,570.96	\$ -	\$ 58.09		\$ 58.09		\$ 247,629.05	\$540,164.55	\$ 292,535.50	45.84%
\$ 32,324.06	\$ 487.20	\$ 246,896.48	\$ -	\$ 31.80		\$ 31.80		\$ 246,928.28	\$520,005.89	\$ 273,077.61	47.49%
\$ 42,616.30	\$ 487.20	\$ 270,532.20	\$ -	\$ 27.65		\$ 27.65		\$ 270,559.85	\$685,579.91	\$ 415,020.06	39.46%
\$ 41,582.37	\$ 487.20	\$ 268,635.92	\$ -	\$ 42.20		\$ 42.20		\$ 268,678.12	\$668,946.69	\$ 400,268.57	40.16%
\$ 35,392.76	\$ 487.20	\$ 256,405.31	\$ -	\$ 45.05		\$ 45.05		\$ 256,450.36	\$569,372.73	\$ 312,922.37	45.04%
\$ 37,524.73	\$ 487.20	\$ 257,227.72	\$ -	\$ 39.63		\$ 39.63		\$ 257,267.35	\$603,670.28	\$ 346,402.93	42.62%
\$ 37,479.57	\$ 487.20	\$ 256,894.37	\$ -	\$ 26.37		\$ 26.37		\$ 256,920.74	\$602,943.99	\$ 346,023.25	42.61%
\$ 34,103.26	\$ 487.20	\$ 248,734.98	\$ -	\$ 56.16		\$ 56.16		\$ 248,791.14	\$548,628.27	\$ 299,837.13	45.35%
\$ 33,378.76	\$ 487.20	\$ 246,828.53	\$ -	\$ 22.93		\$ 22.93		\$ 246,851.46	\$536,973.09	\$ 290,121.63	45.97%

\$ 33,063.22	\$ 487.20	\$ 245,439.73	\$ -	\$ 49.33		\$ 49.33		\$ 245,489.06	\$531,896.98	\$ 286,407.92	46.15%
\$ 36,508.91	\$ 487.20	\$ 254,632.12	\$ -	\$ 34.30		\$ 34.30		\$ 254,666.42	\$587,328.65	\$ 332,662.23	43.36%
\$ 33,365.08	\$ 487.20	\$ 247,105.11	\$ -	\$ 20.44		\$ 20.44		\$ 247,125.55	\$536,753.08	\$ 289,627.53	46.04%
\$ 40,593.41	\$ 487.20	\$ 265,301.07	\$ -	\$ 30.10		\$ 30.10		\$ 265,331.17	\$653,037.13	\$ 387,705.96	40.63%
\$ 32,226.52	\$ 487.20	\$ 245,622.04	\$ -	\$ 38.02		\$ 38.02		\$ 245,660.06	\$518,436.68	\$ 272,776.62	47.38%
\$ 38,586.84	\$ 487.20	\$ 274,837.60	\$ -	\$ 14.32		\$ 14.32		\$ 274,851.92	\$620,756.77	\$ 345,904.85	44.28%
\$ 45,132.85	\$ 487.20	\$ 293,242.71	\$ -	\$ 51,092.74		\$ 51,092.74		\$ 344,335.45	\$726,064.22	\$ 381,728.77	47.42%
\$ 42,321.20	\$ 487.20	\$ 269,761.38	\$ -	\$ 16.50		\$ 16.50		\$ 269,777.88	\$680,832.48	\$ 411,054.60	39.62%
\$ 88,602.34	\$ 487.20	\$ 282,919.69	\$ -	\$ -		\$ -		\$ 282,919.69	\$1,425,369.50	\$ 1,142,449.81	19.85%
\$ 89,082.14	\$ 487.20	\$ 292,507.34	\$ -	\$ 116,000.00		\$ 116,000.00		\$ 408,507.34	\$901,496.23	\$ 492,988.89	45.31%
\$ 105,898.20	\$ 487.20	\$ 291,768.66	\$ -	\$ -		\$ -		\$ 291,768.66	\$1,071,671.88	\$ 779,903.22	27.23%
\$ 26,280.60	\$ 487.20	\$ 203,443.65	\$ -	\$ -		\$ -		\$ 203,443.65	\$422,783.11	\$ 219,339.46	48.12%
\$ 158,451.01	\$ 487.20	\$ 584,526.97	\$ -	\$ 1,736.52		\$ 1,736.52		\$ 586,263.49	\$1,603,497.29	\$ 1,017,233.80	36.56%
\$ 147,756.04	\$ 487.20	\$ 339,977.33	\$ -	\$ -		\$ -		\$ 339,977.33	\$1,495,266.10	\$ 1,155,288.77	22.74%
\$ 48,176.49	\$ 487.20	\$ 271,599.50	\$ -	\$ 116,000.00		\$ 116,000.00		\$ 387,599.50	\$775,028.15	\$ 387,428.65	50.01%

\$ 273,534.65	\$ 487.20	\$ 746,834.07	\$ -	\$ 116,000.00		\$ 116,000.00		\$ 862,834.07	\$2,768,124.30	\$ 1,905,290.23	31.17%
\$ 32,226.52	\$ 487.20	\$ 208,952.37	\$ -	\$ -		\$ -		\$ 208,952.37	\$518,436.67	\$ 309,484.30	40.30%
\$ 93,324.65	\$ 487.20	\$ 275,035.40	\$ -	\$ -		\$ -		\$ 275,035.40	\$944,429.79	\$ 669,394.39	29.12%
\$ 17,130.87	\$ 487.20	\$ 174,348.20	\$ -	\$ -		\$ -		\$ 174,348.20	\$275,589.13	\$ 101,240.93	63.26%
\$ 96,195.96	\$ 487.20	\$ 237,022.19	\$ -	\$ 116,000.00		\$ 116,000.00		\$ 353,022.19	\$973,486.89	\$ 620,464.70	36.26%
\$ 98,928.70	\$ 487.20	\$ 281,491.72	\$ -	\$ -		\$ -		\$ 281,491.72	\$1,001,141.76	\$ 719,650.04	28.12%
\$ 125,145.77	\$ 487.20	\$ 331,409.78	\$ -	\$ 232,000.00		\$ 232,000.00		\$ 563,409.78	\$1,266,454.08	\$ 703,044.30	44.49%
\$ 383,738.51	\$ 487.20	\$ 846,747.14	\$ -	\$ -		\$ -		\$ 846,747.14	\$3,883,368.55	\$ 3,036,621.41	21.80%
\$ 83,683.19	\$ 365.40	\$ 260,475.48	\$ -	\$ -		\$ -		\$ 260,475.48	\$846,859.77	\$ 586,384.29	30.76%
\$ 25,831,485.96	\$ 24,066.52	\$ 44,449,396.19	\$ -	\$ 1,455,643.27	\$ -	\$ 1,455,643.27		\$ 45,605,039.46	\$ 70,605,511.20	\$ 25,000,471.74	

INE/CG1274/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA REGIONAL XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SX-RAP-78/2018

A N T E C E D E N T E S

I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. El seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado y la Resolución, identificados con los números **INE/CG1159/2018** e **INE/CG1160/2018** respectivamente, relativos a la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador y Diputados Locales, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el quince de agosto de dos mil dieciocho, el **C. Horacio Duarte Olivares, Representante del Partido Político Morena ante el Consejo General de este Instituto**, interpuso recurso de apelación para controvertir la parte conducente de la Resolución identificada con el números **INE/CG1160/2018**, radicado en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera Circunscripción Electoral Plurinominal con sede en la Ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave (en adelante Sala Regional Xalapa), identificado con la clave alfanumérica **SX-RAP-78/2018**.

III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Xalapa resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el seis de septiembre de dos mil dieciocho, determinando en su Punto Resolutivo **PRIMERO**, lo que a continuación se transcribe:

*“**PRIMERO.** Se modifica, en lo que fue materia de impugnación, la Resolución **INE/CG1160/2018** emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para los efectos previstos en el apartado correspondiente de la presente ejecutoria.”*

IV. Derivado de lo anterior, si bien es cierto la ejecutoria recaída al recurso de apelación SX-RAP-78/2018 tuvo por efecto **modificar** en lo que fue materia de impugnación **la Resolución INE/CG1160/2018**, también lo es que el Dictamen Consolidado forma parte de la motivación de dicha Resolución que por esta vía se acata e interviene para los efectos ordenados por la Sala Regional Xalapa, por lo que se procede a la modificación de ambos documentos. Lo anterior, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos c), d) y g) de la de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables, la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de mérito.

CONSIDERANDO

1. Competencia. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 44, numeral 1, incisos j) y aa); 190, numeral 1 y 191, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de campaña que presenten los partidos políticos y candidatos a los cargos de Gobernador y Diputados Locales correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

2. Determinación del órgano jurisdiccional. Que el seis de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Regional Xalapa resolvió modificar la Resolución INE/CG1160/2018, no obstante lo anterior, toda vez que el Dictamen Consolidado forma parte de la motivación de dicha Resolución se modifican ambas determinaciones, identificados con los números de Acuerdo **INE/CG1159/2018** e **INE/CG1160/2018**, respectivamente, emitidos por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en el sentido de modificar las conclusiones 7-C17-P2 y 7-C18-P2, del Considerando 38.7 relativa a la Coalición “Juntos Haremos Historia”, se procede a la modificación de ambos documentos, para los efectos precisados en el presente Acuerdo.

A fin de dar cumplimiento al mismo, se procederá a modificar el Dictamen Consolidado y la Resolución referida, observando a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria.

3. Alcances del cumplimiento. Que por lo anterior y en razón de los Considerandos **CUARTO y QUINTO** de la sentencia identificada con la clave alfanumérica SX-RAP-78/2018, relativos al **estudio de fondo y efectos**, la Sala Regional Xalapa, determinó lo que a continuación se transcribe:

“CUARTO. Estudio de fondo.

(...) por cuanto hace a dos bardas, sustentadas en las pólizas 101 normal de diario, y concentradora 795 normal de diario, se observa que éstas sí coinciden con las observadas por la UTF.

114. En efecto, el ANEXO 10-A_P2 indica que no se reportaron dos bardas ubicadas en la calle Tuxpan, las cuales, al revisar el apartado de hallazgos, se puede corroborar que se trata de las siguientes:

[Se inserta tabla con 2 imágenes]

115. Mientras que las bardas reportadas en las evidencias de las pólizas 101 normal de diario y de la concentradora 795 normal de diario son:

[Se inserta tabla con 2 imágenes]

116. Asimismo, tanto en el anexo como en los permisos de utilización de barda, pinta de bardas y lonas mayores a 3 m², se observa que ambas bardas están ubicadas en la calle de Tuxpan, Esquina Flores Magón, en Papantla, Veracruz.

*117. De ahí que esta Sala Regional concluya que el agravio del partido actor es **fundado** únicamente respecto del reporte de las dos bardas ubicadas sobre la calle Tuxpan de la ciudad de Papantla, Veracruz.*

118. En consecuencia, debe revocarse la sanción impuesta al partido actor para los efectos que se precisarán en el apartado correspondiente.

119. Ahora bien, por cuanto hace a la conclusión 7-C18-P2, el actor afirma que sí reportó los gastos observados, los cuales se sustentan en las pólizas 25, normal de diario de la candidata, y 192 normal de diario de la concentradora; mientras que, por cuanto hace a los rubros señalados respecto a las lonas de 3 x 3 m, señala que fueron reportados y subidos al SIF en las pólizas 190 y 191 de la concentradora, así como 26 y 27 normal de diario de la candidata.

(...)

123. De la revisión del citado anexo, se corrobora que lo que no fue reportado, según la UTF, fueron dos mantas menores a 12 metros, correspondientes a la candidata a diputada local por el Distrito 10, Rosalinda Galindo Silva, cuyas imágenes se insertan a continuación:

[Se inserta tabla con 2 imágenes]

124. No obstante, al revisar la póliza 25, normal de diario, se advierte que la misma ampara el 'INGRESO POR APORTACIÓN DE LA CONCENTRADORA LOCAL EN ESPECIE APORTACION LONAS 2 X 1 MTS MILITANTE ROSALINDA SILVA MEDELLIN FACT CC05F', y tiene como evidencia de la aportación, la siguiente:

[Se inserta imagen]

125. Por su parte, de la revisión de la póliza 190 de la concentradora y la 26 normal de diario, se observa que amparan la 'APORTACIÓN DE MILITANTE IMPRESIÓN DE LONAS DE 3 X 3 MT MILITANTE OSCAR MENDOZA CORTES FACT 9B0A7', mientras que la 191 y 27 normal de diario amparan 'APORTACIÓN DE MILITANTE IMPRESIÓN DE LONAS 3 X 3 MT MILITANTE HEBER LARA FACT 15D22'. No obstante, al revisar los testigos de las mismas, se corrobora que se trata de la misma manta, cuya imagen se inserta a continuación:

[Se inserta imagen]

126. Ahora, toda vez que de la evidencia no se puede determinar con claridad si se trata de la misma lona reportada, ya que el lugar donde se encuentra fijada es distinto, y la fotografía sirve para amparar dos aportaciones en especie distintas, esta Sala Regional concluye que con la misma no se subsana la observación realizada por la UTF.

*127. Sin embargo, ya que la primera lona sí coincide, el agravio debe declararse **fundado**, y lo procedente es **revocar** la sanción impuesta al partido actor para los efectos que se precisarán en el apartado correspondiente.*

(...)

QUINTO. Efectos.

*216. Al haberse declarado fundados los agravios del partido actor respecto a que sí reportó: (i) las dos bardas de 3 x 2 m, ubicadas sobre la calle Tuxpan de la ciudad de Papantla, Veracruz; y (ii) la lona respaldada con la póliza 25, normal de diario, correspondientes a las conclusiones 7-C17-P2 y 7-C18-P2, lo procedente es **modificar**, en la materia de impugnación, la Resolución controvertida.*

217. Lo anterior, para el efecto de que la autoridad responsable tenga por reportados los elementos señalados en el estudio de las conclusiones correspondientes, y hecho lo anterior, reindividualice las sanciones respectivas.

(...)

RESUELVE

PRIMERO. *Se modifica, en lo que fue materia de impugnación, la Resolución INE/CG1160/2018 emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para los efectos previstos en el apartado correspondiente de la presente ejecutoria.*

SEGUNDO. *Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que emita una nueva resolución, tomando en cuenta lo expuesto en la parte considerativa de esta ejecutoria. Asimismo, se le vincula para que informe a esta Sala Regional del cumplimiento dado a la presente sentencia, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.”*

4. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso el Recurso de Apelación identificado como **SX-RAP-78/2018**.

Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y reglas locales, prevaleciendo las Leyes Generales.

Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la Tesis II/2018 cuyo rubro señala MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN, mediante la cual estableció que en atención al principio de legalidad que rige en los procedimientos Sancionadores, el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del ilícito.

En ese contexto, para la imposición de las sanciones respectivas, será aplicable el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA's) vigente a partir del uno de febrero de dos mil dieciocho y publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha diez de enero de la misma anualidad, mismo que asciende a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.), lo anterior, en virtud de la temporalidad en la cual se desarrolló la etapa de campañas electorales correspondiente al Proceso Electoral referido.

5. Que en tanto la Sala Regional Xalapa dejó intocadas las demás consideraciones que sustentan que sustentan el Dictamen Consolidado **INE/CG1159/2018** y la Resolución identificada como **INE/CG1160/2018**, este Consejo General únicamente se abocará al estudio y análisis de lo relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en el apartado 7, conclusiones 7-C17-P2 y 7-C18-P2 del Dictamen Consolidado y el considerando **38.7**, mismas **conclusiones** de la aludida Resolución, en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Regional Xalapa, materia del presente Acuerdo.

6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace a las **conclusiones 7-C17-P2 y 7-C18-P2**, del Dictamen Consolidado y de la Resolución correspondiente al **Partido Político MORENA, como integrante de la Coalición “Juntos haremos Historia”**, esta autoridad electoral emite una nueva determinación.

En consecuencia, esta autoridad electoral procede a acatar la sentencia referida, para lo cual se realizan las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la sentencia:

Sentencia	Efectos	Acatamiento	Modificación
Modifica en lo que fue de materia de impugnación, específicamente las conclusiones 7-C17-P2 y 7-C18-P2	Se considera que el partido actor sí reportó: (i) dos bardas de 3 x 2 m, ubicadas sobre la calle Tuxpan de la ciudad de Papantla, Veracruz; y (ii) la lona respaldada con la póliza 25, normal de diario.	Conclusión 7-C17-P2: El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de propaganda en la vía pública por un monto de \$5,622.99. Conclusión 7-C18-P2: El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por	En el Dictamen y en la Resolución, las conclusiones 7-C17-P2 Y 7-C18-P2.

Sentencia	Efectos	Acatamiento	Modificación
		concepto gastos asociados a casas de campaña por un monto de \$792.62.	

Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Consejo General modifica el Dictamen Consolidado número **INE/CG1159/2018**, así como la Resolución identificada con el número **INE/CG1160/2018**, relativos a las irregularidades encontradas respecto a la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de los candidatos a los cargos de gobernador y diputados locales, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos siguientes:

A. Modificación al Dictamen Consolidado.

“7. Coalición “Juntos haremos Historia”

(...)

ID	Observación Oficio: INE/UTF/DA/33021/18	Escrito de respuesta sin número de fecha 15 de junio de 2018	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
28	<p>Procedimientos de fiscalización</p> <p>Monitoreo de espectaculares y propaganda en vía pública</p> <p>Derivado del monitoreo, se observó que el sujeto obligado realizó gastos de propaganda en la vía pública que no fueron reportados en los informes.</p> <p>Como se muestra en el ANEXO 10_P2 del presente Dictamen.</p> <p>Se solicita presentar en el SIF, lo siguiente:</p>	<p>“Véase ANEXO R1_P2 del presente Dictamen.</p> <p>De la imagen anterior, se ejemplifica las observaciones y comentarios en donde se puede localizar todas y cada una de las evidencias registradas en su momento, donde la mayoría del reporte ya se tenía reflejado el gasto o aportación, así como realizando las correcciones pertinentes.</p>	<p>No atendida</p> <p>Del análisis a la respuesta del sujeto obligado y los registros realizados en la etapa de corrección, se determinó lo siguiente:</p> <p>(...)</p> <p>De los testigos señalados con (2) en la columna “Referencia Dictamen” del ANEXO 10-A_P2 del presente Dictamen, se verifico que omitió reportarlos. Por tal razón la observación quedó no atendida.</p> <p>No obstante, lo anterior, en acatamiento a lo ordenado por la Sala Xalapa, en la sentencia SX-RAP-78/2018, se considera que las dos bardas de 3 x 2 m, ubicadas sobre la calle Tuxpan de la</p>	<p>7-C17-P2</p> <p>El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de propaganda en la vía pública por un monto de \$5,622.99.</p>	Egreso no reportado	<p>Artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP y 127 del RF</p>

ID	Observación Oficio: INE/UTF/DA/33021/18	Escrito de respuesta sin número de fecha 15 de junio de 2018	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
	(...) Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la LGPP; 46, numeral 1; 126, 127, 207, 223, numeral 6, incisos b), h) e i); 241, numeral 1, inciso h); 319 y 378, del RF.		ciudad de Papantla, Veracruz identificadas con (3) en la columna de "Referencia Dictamen" del ANEXO 10-A_P2 , se encuentran debidamente reportadas por lo que se da por atendida la observación respecto a dichas bardas. Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado en beneficio de sus candidatos, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF, determinación de costo descrita en el ANEXO DC_P2 del presente Dictamen.			
30	Visitas de verificación Casas de campaña El sujeto obligado registró en el SIF domicilios correspondientes a casas de campaña; sin embargo, omitió registrar en su contabilidad los ingresos y gastos generados por la utilización de las mismas. Lo anterior se detalla en el ANEXO 11_P2 del presente Dictamen. (...) Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 127, 143 Ter, numeral 2, y 296, numeral 1, del RF.	"Véase ANEXO R1_P2 del presente Dictamen. De la imagen anterior, se ejemplifica las observaciones y comentarios en donde se puede localizar todas y cada una de las evidencias registradas en su momento, donde la mayoría del reporte ya se tenía reflejado el gasto o aportación, así como realizando las correcciones pertinentes."	No atendida Del análisis a la respuesta del sujeto obligado y los registros realizados en la etapa de corrección, se determinó lo siguiente: (...) De los testigos señalados con (2) en la columna "Referencia Dictamen" del ANEXO 11-A_P2 del presente Dictamen, se verificó que omitió reportarlos. Por tal razón la observación quedó no atendida . No obstante, lo anterior, en acatamiento a lo ordenado por la Sala Xalapa, en la sentencia SX-RAP-78/2018, se considera que, partido actor sí reportó en la póliza 25, normal de diario por concepto de "INGRESO POR APORTACIÓN DE LA CONCENTRADORA LOCAL EN ESPECIE APORTACIÓN LONAS 2*1 MTS MILITANTE ROSALINDA SILVA MEDELLIN FACT	7-C18-P2 El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto gastos asociados a casas de campaña por un monto de \$792.62.	Egreso no reportado	Artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP y 127 del RF.

ID	Observación Oficio: INE/UTF/DA/33021/18	Escrito de respuesta sin número de fecha 15 de junio de 2018	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
			<p>CC05F", en consecuencia, se tiene por atendida la observación respecto de la lona señalada con (3) en la columna "Referencia Dictamen" del ANEXO 11-A_P2 del presente Dictamen.</p> <p>Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado en beneficio de sus candidatos, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF, determinación de costo descrita en el ANEXO DC_P2 del presente Dictamen.</p>			

B. Modificación a la Resolución.

Que la Sala Regional Xalapa, al haber dejado intocadas en la sentencia recaída al expediente **SX-RAP-78/2018** las demás consideraciones que sustentan la Resolución **INE/CG1160/2018** relativas a **la Coalición "Juntos Haremos Historia"**, este Consejo General únicamente se abocará a la modificación de la parte conducente del Considerando **38.7**, relativo a la conclusiones 7-C17-P2 y 7-C18-P2, en los términos siguientes:

"(...)

38.7 COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA.

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del Informe de la campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Veracruz, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado son las siguientes:

(...)

e) 10 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones (...), **7-C17-P2**, (...).

f) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión **7-C18-P2**

(...)

e) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras de los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. **Conclusiones:** (...), **7-C17-P2**, (...).

Visto lo anterior, a continuación, se presentan las conclusiones finales sancionatorias determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado.

No.	Conclusión	Monto involucrado
(...)	(...)	(...)
(...)	(...)	(...)
(...)	(...)	(...)
(...)	(...)	(...)
(...)	(...)	(...)
(...)	(...)	(...)
7-C17-P2	El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de propaganda en la vía pública por un monto de \$5,622.99.	\$5,622.99.
(...)	(...)	(...)
(...)	(...)	(...)
(...)	(...)	(...)

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de mérito, se hicieron del

conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar las observaciones realizadas.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los candidatos involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña materia de estudio, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6 del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de sus candidatos las observaciones que se detallan en el oficio referido en el análisis de la conclusión. Esto, a efecto que los candidatos presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

(...)

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado las diversas conductas que violentan los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra los mismos bienes jurídicos tutelados; por cuestión de método, para facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten.

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a) Valor protegido o trascendencia de la norma.
- b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto.

- c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.
- d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
- e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
- f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.
- g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
- h) La capacidad económica del sujeto infractor.

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción.

CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).

En relación con las irregularidades identificadas en las conclusiones **7-C5-P1, 7-C7-P1, 7-C8-P1, 7-C11-P2, 7-C12-P2, 7-C13-P2, 7-C17-P2, 7-C19-P2, 7-C20-P2 y 5-C21Bis-P2** del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar sus egresos por concepto de Propaganda en vía pública, spots en radio y televisión, propaganda en internet, propaganda en eventos públicos, propaganda en la vía pública y por pago de representantes de casilla de Jornada Electoral,

realizados durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave..

En el caso a estudio, las faltas corresponden a una omisión del sujeto obligado consistente en omitir reportar gastos realizados, durante la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la entidad referida, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.¹

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que ampara los gastos realizados, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refieren las irregularidades observadas:

Descripción de la irregularidad
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
7-C17-P2. “El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de propaganda en la vía pública por un monto de \$5,622.99.”
(...)
(...)
(...)

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el

¹ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

resultado de la comisión de las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse diversas faltas sustanciales consistentes en no reportar los gastos realizados durante el periodo de campaña, mismo que carecen de objeto partidista, se vulneran sustancialmente los principios de transparencia y de certeza en el origen de los recursos.

Así las cosas, las faltas sustanciales que traen consigo la no rendición de cuentas, impiden garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito violó los valores sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que, en el campo de la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia electoral.

Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.

Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable

de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente²:

- a)** Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio.
- b)** Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
- c)** Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
- d)** Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación y sus componentes deberán ser comparables.
- e)** Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y comparable.

Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, valorará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.

Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y

² Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016

documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.

En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación comprobatoria.

El sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos³ y 127 del Reglamento de Fiscalización⁴.

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

³ Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes: b) Informes de Campaña: Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; (...)

⁴ “Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobado las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos mediante la verificación oportuna, al contar con la documentación soporte de las cuentas por pagar con saldos a la conclusión de la campaña.

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al sujeto obligado se traducen en **faltas** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.

Calificación de la falta.

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que las infracciones deben calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

IMPOSICION DE LA SANCIÓN.

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando **Vigésimo Cuarto** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

En la especie, debe tenerse en cuenta que, tal como se explicó en el considerando **Vigésimo Séptimo** de la presente Resolución, los partidos políticos integran coalición. Por ello, es menester señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser sancionadas de manera individual tal y como lo ha sustentado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, '*COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE*'.

Es el caso, que para fijar la sanción, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, según lo establecieron en el convenio respectivo, tal y como se establece en el artículo 340 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los

principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

(...)

Conclusión 7-C17-P2

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$5,622.99 (cinco mil seiscientos veintidós pesos 99/100 M.N.)**.
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁵

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica equivalente al **100% (cien por ciento)** sobre el monto involucrado **\$5,622.99 (cinco mil seiscientos veintidós pesos 99/100 M.N.)**., cantidad que asciende a un total de **\$5,622.99 (cinco mil seiscientos veintidós pesos 99/100 M.N.)**.

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Morena** en lo individual lo correspondiente al **86%** del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento de Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$4,835.77 (cuatro mil ochocientos treinta y cinco 77/100 M.N.)**.

Asimismo, al **Partido del Trabajo** en lo individual lo correspondiente al **7%** del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto

⁵ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

político es una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$393.61 (trescientos noventa y tres pesos 61/100 M.N.)**.

Por último, al **Partido Encuentro Social** en lo individual lo correspondiente al **7%** del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$393.61 (trescientos noventa y tres pesos 61/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

(...)

f) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria, infractora del artículo 143 Ter del Reglamento de Fiscalización. **Conclusión 7-C18-P2**

A continuación, se presenta la conclusión final sancionatoria determinada por la autoridad en el Dictamen Consolidado.

No.	Conclusión	Monto involucrado
7-C18-P2	7-C18-P2 El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto gastos asociados a casas de campaña por un monto de \$792.62.	\$792.62.

En consecuencia, al omitir realizar el registro contable de los gastos por el uso goce temporal de los inmuebles utilizados como casa de campaña, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 143 Ter del Reglamento de Fiscalización por un importe de \$792.62 (setecientos noventa y dos pesos 62/100 M.N).

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso

d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en la observación de mérito, se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, a partir del momento de la notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad detectada.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia al candidato involucrado y se determine si hay responsabilidad del mismo en la irregularidad encontrada en la revisión de los informes de campaña materia de estudio, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6, del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de su candidato la observación que se detalla en el oficio referido en el análisis de la conclusión. Esto, a efecto que el candidato presentara las aclaraciones que considerara procedente, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

(...)

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta el artículo 143 Ter del Reglamento de Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a)** Tipo de infracción (acción u omisión).
- b)** Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron.
- c)** Comisión intencional o culposa de la falta.
- d)** La trascendencia de las normas transgredidas.

- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando **Vigésimo Cuarto** de la presente Resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción

CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).

En relación con la irregularidad identificada en la conclusión analizada del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar los egresos correspondientes a la adquisición del uso o goce temporal de aquellos bienes inmuebles utilizados como casas de campaña y realizados durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una **omisión** del sujeto obligado consistente en no reportar gastos realizados en virtud de la utilización de inmuebles como casa de campaña, durante la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 143 Ter, del Reglamento de Fiscalización.

b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron.

Modo: El sujeto obligado omitió reportar en el Informe de Campaña el egreso relativo a la **adquisición del uso o goce temporal de los bienes inmuebles utilizadas como casa de campaña por un monto de \$792.62 (setecientos noventa y dos pesos 62/100 M.N.)**. De ahí que la coalición contravino lo dispuesto en el artículo 143 Ter del Reglamento de Fiscalización.

Descripción de la Irregularidad observada
7-C18-P2 El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto gastos asociados a casas de campaña por un monto de \$792.62.

Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado surgió de la revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Egresos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, concretándose en dicha entidad federativa.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a las norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados por la norma consistentes en la legalidad y adecuado control de recursos como principio rector de la actividad electoral; esto es, al omitir reportar los egresos por concepto de la adquisición de uso o goce temporal de los inmuebles utilizados como casa de campaña, en desatención al artículo 143 Ter del Reglamento de Fiscalización, se acredita la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.

En este caso, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, con lo que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos. Debido a lo anterior, el sujeto obligado en cuestión viola los valores antes establecidos y afecta a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la certeza sobre el origen de los recursos.

En este orden de ideas en la conclusión analizada, el sujeto obligado en comentario vulneró lo dispuesto en el artículo 143 Ter del Reglamento de Fiscalización⁶.

Del artículo señalado se desprende que los sujetos obligados tienen la obligación de registrar por lo menos un bien inmueble el cual sea utilizado como casa de campaña, y en consecuencia, reportar en su informe de ingresos y gastos de campaña aquellas erogaciones realizadas en virtud de la adquisición del uso o goce temporal del mismo, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad de dicha disposición es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la legalidad y el adecuado control de recursos mediante la obligación relativa al registro contable de las erogaciones conducentes en los informes, lo cual implica, que los sujetos obligados rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido vulnera directamente la legalidad y el adecuado control de los recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Así, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma todos los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, siendo en el caso específico, aquellas erogaciones concernientes a la adquisición del uso o goce temporal de inmueble alguno utilizado para el desarrollo de sus actividades de campaña (casa de campaña), otorgando en consecuencia una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

⁶ "Artículo 143 ter. 1. Los sujetos obligados deberán registrar, en el medio que proporcione el Instituto, las casas de precampaña, de obtención de apoyo ciudadano y de campaña que utilicen, proporcionando la dirección de la misma, así como el periodo en que será utilizada. Adicionalmente tendrán que anexar la documentación comprobatoria correspondiente ya sea si se trata de una aportación en especie o de un gasto realizado. 2. En el periodo de campaña se deberá registrar al menos un inmueble. En caso de que el bien inmueble empleado sea un comité del partido político que corresponda, deberá contabilizarse de manera proporcional y racional a los gastos que el uso del mismo genere a las campañas como transferencias en especie del respectivo Comité por el tiempo en que sea utilizado el inmueble."

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la hipótesis normativa prevista en el artículo 143 Ter del Reglamento de Fiscalización, siendo esta norma de gran trascendencia para la tutela de los principios de legalidad y adecuado control de recursos.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta señalada en la conclusión analizada es la legalidad y el adecuado control de los recursos de los sujetos obligados para el desarrollo de sus fines.

En el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado infractor se traduce en **una falta** de resultado que ocasiona un daño directo y real de los bienes jurídicos tutelados, arriba señalados.

En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en **una falta de fondo**, cuyo objeto infractor concurre directamente en tener legalidad y un adecuado control de los recursos erogados por el sujeto obligado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los sujetos obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y el adecuado control de los recursos erogados por el partido infractor.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta.

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando **Vigésimo Cuarto** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Es el caso, que para fijar la sanción en virtud que estamos en presencia de diversas infracciones/de una infracción en el que se impondrán la sanción a diversos partidos que integran la Coalición “Juntos Haremos Historia”, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, de conformidad con el considerando **Vigésimo Séptimo**, tal y como se establece en el artículo 340, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente.

Conclusión 7-C18-P2.

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar los egresos realizados a fin de adquirir el uso o goce temporal de los bienes inmuebles utilizados como casas de campaña.

- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos aludidos realizados durante la campaña en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$792.62 (setecientos noventa y dos pesos 62/100 M.N.)**.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

(...)

Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al **150% (ciento cincuenta por ciento)** sobre el monto involucrado que asciende a un total de **\$1,188.93 (un mil ciento ochenta y ocho pesos 93/100 M.N.)**.⁷

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al **Partido Morena** en lo individual, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento

⁷ Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final puede presentar una variación derivado de la conversión a días de salario mínimo (ahora Unidades de Medida de Actualización).

Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$1,022.47 (un mil veintidós pesos 47/100 M.N).**

Asimismo, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al **Partido del Trabajo** en lo individual, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$83.22 (ochenta y tres pesos 2260/100 M.N).**

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al **Partido Encuentro Social** en lo individual, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$83.22 (ochenta y tres pesos 2260/100 M.N).**

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

(...)"

7. Que la sanción originalmente impuesta a la Coalición Juntos Haremos Historia, en la resolución **INE/CG1160/2018**, consistió en:

Sanciones en resolución INE/CG1160/2018	Modificación	Sanciones en Acatamiento a SX-RAP-78/2018
SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 38.7 de la presente Resolución, se imponen a la Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los Partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, las	La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó declarar fundado el agravio vertido por la apelante, por lo que la sanción impuesta a los integrantes de la Coalición “Juntos haremos	SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 38.7 de la presente Resolución, se imponen a la Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los Partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, las

Sanciones en resolución INE/CG1160/2018	Modificación	Sanciones en Acatamiento a SX-RAP-78/2018
<p>siguientes sanciones:</p> <p>(...)</p> <p>e) 11 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones: 7-C5-P1, 7-C6-P1, 7-C7-P1, 7-C8-P1, 7-C11-P2, 7-C12-P2, 7-C13-P2, 7-C17-P2, 7-C19-P2, 7-C20-P2 y 5-C21 Bis-P2.</p> <p>(...)</p> <p><u>Conclusión 7-C17-P2</u></p> <p>Por lo que toca al Partido Morena una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$5,191.28 (cinco mil ciento noventa y un pesos 28/100 M.N.)</p> <p>Por lo que toca al Partido del Trabajo una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$424.65 (cuatrocientos veinticuatro pesos 65/100 M.N.)</p> <p>Por lo que toca al Partido Encuentro Social una reducción del 25% (veinticinco</p>	<p>Historia” respecto de las conclusiones 7-C17-P2 y 7-C18-P2 mismas que fueron modificadas.</p>	<p>siguientes sanciones:</p> <p>(...)</p> <p>e) 11 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones: 7-C5-P1, 7-C6-P1, 7-C7-P1, 7-C8-P1, 7-C11-P2, 7-C12-P2, 7-C13-P2, 7-C17-P2, 7-C19-P2, 7-C20-P2 y 5-C21 Bis-P2.</p> <p>(...)</p> <p><u>Conclusión 7-C17-P2</u></p> <p>Por lo que toca al Partido Morena una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$4,835.77 (cuatro mil ochocientos treinta y cinco 77/100 M.N.)</p> <p>Por lo que toca al Partido del Trabajo una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$393.61 (trescientos noventa y tres pesos 61/100 M.N.)</p>

Sanciones en resolución INE/CG1160/2018	Modificación	Sanciones en Acatamiento a SX-RAP-78/2018
<p>por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$424.65 (cuatrocientos veinticuatro pesos 65/100 M.N.).</p> <p>(...)</p> <p>f) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 7-C18-P2</p> <p>Por lo que toca al Partido MORENA una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$1,090.00 (mil noventa pesos 00/100 M.N.).</p> <p>Por lo que toca al Partido del Trabajo una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$89.15 (ochenta y nueve pesos 15/100 M.N.).</p> <p>Por lo que toca al Partido Encuentro Social una reducción del 25%</p>		<p>Por lo que toca al Partido Encuentro Social una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$393.61 (trescientos noventa y tres pesos 61/100 M.N.).</p> <p>(...)</p> <p>f) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 7-C18-P2</p> <p>Por lo que toca al Partido MORENA una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$1,022.47 (un mil veintidós pesos 47/100 M.N.).</p> <p>Por lo que toca al Partido del Trabajo una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento</p>

Sanciones en resolución INE/CG1160/2018	Modificación	Sanciones en Acatamiento a SX-RAP-78/2018
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$89.15 (ochenta y nueve pesos 15/100 M.N.) .		de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$83.22 (ochenta y tres pesos 2260/100 M.N.) . Por lo que toca al Partido Encuentro Social una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$83.22 (ochenta y tres pesos 2260/100 M.N.) .

8. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el presente Acuerdo, se impone al Partido Político Morena así como a los integrantes de la otrora Coalición “Juntos Haremos Historia” la siguiente sanción:

“R E S U E L V E

(...)

SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 38.7 de la presente Resolución, se imponen a la Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los Partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, las siguientes sanciones:

(...)

e) 11 Faltas de carácter sustancial o de fondo: **Conclusiones: (...), 7-C17-P2, 7- (...).**

(...)

Conclusión 7-C17-P2

Por lo que toca al **Partido Morena** una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$4,835.77 (cuatro mil ochocientos treinta y cinco 77/100 M.N.)**.

Por lo que toca al **Partido del Trabajo** una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$393.61 (trescientos noventa y tres pesos 61/100 M.N.)**.

Por lo que toca al **Partido Encuentro Social** una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$393.61 (trescientos noventa y tres pesos 61/100 M.N.)**.
(...)

f) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 7-C18-P2

Por lo que toca al **Partido MORENA** una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$1,022.47 (un mil veintidós pesos 47/100 M.N.)**.

Por lo que toca al **Partido del Trabajo** una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$83.22 (ochenta y tres pesos 2260/100 M.N.)**.

Por lo que toca al **Partido Encuentro Social** una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de

Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$83.22 (ochenta y tres pesos 2260/100 M.N).**
(...)”

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y aa) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

A C U E R D A

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado identificado **INE/CG1159/2018** y la Resolución **INE/CG1160/2018**, aprobados en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, respectivamente, relativos a las irregularidades encontradas respecto de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de los candidatos a los cargos de gobernador y diputados locales, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEGUNDO. Infórmese a la **Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SX-RAP-78/2018**.

TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Organismo Público Local del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para que dicho organismo esté en posibilidad de notificar a los interesados, dentro de las **cuarenta y ocho horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo**. Derivado de lo anterior, se solicita al Organismo Público Local remita a la Sala Regional Xalapa y a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes después de haberlas practicado.

CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.



Unidad Técnica de Fiscalización
Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas Nacionales y Otros
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018
Candidatos Diputados Locales de la Coalición Juntos Haremos Historia
Monitoreo de Propaganda y Anuncios Espectaculares Colocados en la Vía Pública no Reportado en Contabilidad

Cons	ID	EncuestaResp	uestald	TicketId	Entidad	Municipio	Tipo de Anuncio	Ancho (metros)	Alto(metros)	Lema Versión	Cantidad	Placas	Distritos Locales	Cargo Local	Beneficiado(s) Local	Conciliado	Referencia contable	Factura	Proveedor	Importe	Referencia	Tipo de propaganda	Ámbito
43	266132	169070		169103	Veracruz	Papantla	Bardas	3	2	La Esperanza De México	1		Papantla De Oliente (6)	Diputado Local Mr	Eric Dominguez Vazquez (1)	Si	ID 59723 PN-1/DR-101/01-07-18	RM-COA-CL-VER-0458	Pedro Vazquez Rodriguez		3	Personalizado	Ambos
44	271725	169131		169164	Veracruz	Papantla	Bardas	3	1	La Esperanza De México	1		Papantla De Oliente (6)	Diputado Local Mr	Eric Dominguez Vazquez (1)	Si	ID 59723 PN-1/DR-101/01-07-18	RM-COA-CL-VER-0458	Pedro Vazquez Rodriguez		3	Directo	Local

Cons.	Municipio y/o Distrito	Fecha	Tipo de Evento	Ticket	Folio de Acta de Verificación	Cargo	Candidato	Descripción del Gasto Identificado	Cantidad	Referencia Contable	Factura	Proveedor	Costo	Observaciones	Gasto No Reportado	Referencia	Tipo propaganda	Ámbito
3	Xalapa	13/06/2018	Casa	149601	INE-VV-0014944	Diputado Local Mr	Distrito 10: Rosalinda Galindo Silva	Mantas (menores a 12mts)	2	PN1/DR-25/08-06-18	C05F	Rosalinda Silva Medellín	\$5,220.00	Aportación de simpatizante		3		

Candidato de la COA (Morena, PT y PES) “Juntos Haremos Historia (Veracruz)”

Gobernador
Cuitlahuac García Jiménez (44699)
Anexo DC_P2

Observación	Determinación del Costo																							
Procedimientos de fiscalización Monitoreo de espectaculares y propaganda en vía pública 17. Derivado del monitoreo, se observó que el sujeto obligado realizó gastos de propaganda en la vía pública que no fueron reportados en los informes.	Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado en beneficio de sus candidatos, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF descrito en el apartado correspondiente del presente dictamen.																							
	Identificación del costo para valuación en la Matriz de Precios (Pesos)																							
	Id matriz de precios	Proveedor	Concepto	Unidad de medida	Importe con IVA Pesos																			
	15918	Héctor Martínez Jaramillo	Bardas	m2	46.40																			
	15834	Raúl Hernández Uscanga	Cartelera	m2	221.19																			
Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen Consolidado la matriz de precios correspondiente a la entidad.																								
De los señalado en la observación ID 17, del presente dictamen, se constató que el sujeto obligado omitió reportar los siguientes conceptos:																								
<table><tr><th>Concepto</th><th>Cantidad</th><th>Costo Unitario con IVA</th><th>Total</th></tr><tr><td>Bardas</td><td>77 m2</td><td>46.40</td><td>3,572.80</td></tr><tr><td>Carteleras</td><td>28 m2</td><td>221.19</td><td>6,193.32</td></tr><tr><td>Vinilonas</td><td>18 m2</td><td>88.07</td><td>1,585.26</td></tr><tr><td colspan="3">Total</td><td>11,351.38</td></tr></table>					Concepto	Cantidad	Costo Unitario con IVA	Total	Bardas	77 m2	46.40	3,572.80	Carteleras	28 m2	221.19	6,193.32	Vinilonas	18 m2	88.07	1,585.26	Total			11,351.38
Concepto	Cantidad	Costo Unitario con IVA	Total																					
Bardas	77 m2	46.40	3,572.80																					
Carteleras	28 m2	221.19	6,193.32																					
Vinilonas	18 m2	88.07	1,585.26																					
Total			11,351.38																					
La determinación del costo se presenta en el anexo II-A, “Monitoreo Vía Pub – Directo” y “Monitoreo Vía Pub – Prorratio”																								
Derivado de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del RF, se procedió a determinar el gasto entre las campañas beneficiadas, atendiendo los criterios de distribución del artículo 218 del RF. Tal como se detalla en el “Anexo Cedula de Prorratio 7-C11-P2” .																								
En virtud de lo anterior, el monto que el sujeto obligado omitió reportar en el SIF que corresponde a los candidatos del ámbito local es de \$10,724.98.																								

Gobernador
Cuitlahuac García Jiménez (44699)
Anexo DC_P2

Observación		Determinación del Costo																				
Monitoreo de internet 19. Derivado del monitoreo en internet se observó propaganda que omitió reportar en el informe.		Identificación del costo para valuación en la Matriz de Precios (Pesos)																				
		<table><tr><th>Id matriz de precios</th><th>Proveedor</th><th>Concepto</th><th>Unidad de medida</th><th>Importe con IVA</th></tr><tr><td>15651</td><td>Alejandro Sobrevilla Viveros</td><td>Servicio de marketing digital, administración de anuncios en Facebook ADS y desarrollo de sitio web</td><td>Servicio</td><td>\$17,400.00</td></tr><tr><td>9201</td><td>Pm Creativa S.A. de C.V.</td><td>Diseño y creación de imágenes para redes sociales Facebook</td><td>Servicio</td><td>5,500.00</td></tr><tr><td>16317</td><td>Mayra Icela Morales del Angel</td><td>Producción de un video para redes sociales</td><td>Servicio</td><td>2,000.00</td></tr></table>	Id matriz de precios	Proveedor	Concepto	Unidad de medida	Importe con IVA	15651	Alejandro Sobrevilla Viveros	Servicio de marketing digital, administración de anuncios en Facebook ADS y desarrollo de sitio web	Servicio	\$17,400.00	9201	Pm Creativa S.A. de C.V.	Diseño y creación de imágenes para redes sociales Facebook	Servicio	5,500.00	16317	Mayra Icela Morales del Angel	Producción de un video para redes sociales	Servicio	2,000.00
		Id matriz de precios	Proveedor	Concepto	Unidad de medida	Importe con IVA																
		15651	Alejandro Sobrevilla Viveros	Servicio de marketing digital, administración de anuncios en Facebook ADS y desarrollo de sitio web	Servicio	\$17,400.00																
		9201	Pm Creativa S.A. de C.V.	Diseño y creación de imágenes para redes sociales Facebook	Servicio	5,500.00																
16317	Mayra Icela Morales del Angel	Producción de un video para redes sociales	Servicio	2,000.00																		
Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen Consolidado la matriz de precios correspondiente a la entidad.																						
De los señalado en la observación ID 19, del presente dictamen, se constató que el sujeto obligado omitió reportar los siguientes conceptos:																						
		<table><tr><th>Concepto</th><th>Cantidad</th><th>Costo Unitario con IVA</th><th>Total</th></tr><tr><td>1 hosting de página web y 2 publicaciones en Facebook</td><td>1</td><td>17,400.00</td><td>17,400.00</td></tr><tr><td>Diseño de imagen y edición de fotografías</td><td>1</td><td>5,500.00</td><td>5,500.00</td></tr><tr><td>1 Producción y edición de Spot publicitario</td><td>1</td><td>2,000.00</td><td>2,000.00</td></tr><tr><td colspan="3">Total</td><td>24,900.00</td></tr></table>	Concepto	Cantidad	Costo Unitario con IVA	Total	1 hosting de página web y 2 publicaciones en Facebook	1	17,400.00	17,400.00	Diseño de imagen y edición de fotografías	1	5,500.00	5,500.00	1 Producción y edición de Spot publicitario	1	2,000.00	2,000.00	Total			24,900.00
Concepto	Cantidad	Costo Unitario con IVA	Total																			
1 hosting de página web y 2 publicaciones en Facebook	1	17,400.00	17,400.00																			
Diseño de imagen y edición de fotografías	1	5,500.00	5,500.00																			
1 Producción y edición de Spot publicitario	1	2,000.00	2,000.00																			
Total			24,900.00																			
		La determinación del costo se presenta en el anexo II-A, “Internet – Directo”																				
		Derivado de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del RF, se procedió a determinar el gasto entre las campañas beneficiadas, atendiendo los criterios de distribución del artículo 218 del RF. Tal como se detalla en el “Anexo Cedula de Prorratio 7-C12-P2”.																				
		En virtud de lo anterior, el monto que el sujeto obligado omitió reportar en el SIF que corresponde a los candidatos del ámbito local es de \$24,900.00.																				

Gobernador
Cuitlahuac García Jiménez (44699)
Anexo DC_P2

Observación		Determinación del Costo																																																																			
Visitas de verificación Eventos públicos 20. De la evidencia obtenida en las visitas de verificación a eventos públicos, se observaron diversos gastos que no fueron reportados en el informe.		Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado en beneficio de sus candidatos, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF descrito en el apartado correspondiente del presente dictamen.																																																																			
		Identificación del costo para valuación en la Matriz de Precios (Pesos)																																																																			
		<table><tr><th>Id matriz de precios</th><th>Proveedor</th><th>Concepto</th><th>Unidad de medida</th><th>Importe con IVA</th></tr><tr><td>16022</td><td>Cobaver SA de CV</td><td>Perifoneo</td><td>Servicio</td><td>3,480.00</td></tr><tr><td>17229</td><td>Yuneelsi Monserrat Medina Fernández</td><td>Pulseiras</td><td>Pieza</td><td>3.13</td></tr><tr><td>16296</td><td>Cobaver S de RL de CV</td><td>Vallas de acero</td><td>Pieza</td><td>23.20</td></tr><tr><td>7352</td><td>Rodolfo Ramirez Llanderal</td><td>Fotografos</td><td>Dia</td><td>309.33</td></tr><tr><td>16244</td><td>Ardiou, S.A. De C.V.</td><td>Gorra</td><td>Pieza</td><td>29.00</td></tr><tr><td>401</td><td>Araçeli Edith Randolph Muñoz</td><td>Gorros</td><td>Pieza</td><td>19.00</td></tr><tr><td>11401</td><td>Citalli Barradas Fuentes</td><td>Sombrilla</td><td>Pieza</td><td>52.20</td></tr><tr><td>12563</td><td>Luis Felipe Trujillo Fonseca</td><td>Cordones portagafete</td><td>Pieza</td><td>3.60</td></tr><tr><td>14311</td><td>Baldemar Eleazar Hernández De Dios</td><td>Lapiceros</td><td>Pieza</td><td>5.35</td></tr><tr><td>5184</td><td>Roman Chiriev</td><td>Bolsa morral de tela</td><td>Pieza</td><td>23.20</td></tr><tr><td>6172</td><td>Guillermo Padilla Escamilla</td><td>Pines</td><td>Pieza</td><td>9.28</td></tr><tr><td>16294</td><td>Ardiou, S.A. de C.V.</td><td>Playera</td><td>Pieza</td><td>23.20</td></tr></table>					Id matriz de precios	Proveedor	Concepto	Unidad de medida	Importe con IVA	16022	Cobaver SA de CV	Perifoneo	Servicio	3,480.00	17229	Yuneelsi Monserrat Medina Fernández	Pulseiras	Pieza	3.13	16296	Cobaver S de RL de CV	Vallas de acero	Pieza	23.20	7352	Rodolfo Ramirez Llanderal	Fotografos	Dia	309.33	16244	Ardiou, S.A. De C.V.	Gorra	Pieza	29.00	401	Araçeli Edith Randolph Muñoz	Gorros	Pieza	19.00	11401	Citalli Barradas Fuentes	Sombrilla	Pieza	52.20	12563	Luis Felipe Trujillo Fonseca	Cordones portagafete	Pieza	3.60	14311	Baldemar Eleazar Hernández De Dios	Lapiceros	Pieza	5.35	5184	Roman Chiriev	Bolsa morral de tela	Pieza	23.20	6172	Guillermo Padilla Escamilla	Pines	Pieza	9.28	16294	Ardiou, S.A. de C.V.	Playera
Id matriz de precios	Proveedor	Concepto	Unidad de medida	Importe con IVA																																																																	
16022	Cobaver SA de CV	Perifoneo	Servicio	3,480.00																																																																	
17229	Yuneelsi Monserrat Medina Fernández	Pulseiras	Pieza	3.13																																																																	
16296	Cobaver S de RL de CV	Vallas de acero	Pieza	23.20																																																																	
7352	Rodolfo Ramirez Llanderal	Fotografos	Dia	309.33																																																																	
16244	Ardiou, S.A. De C.V.	Gorra	Pieza	29.00																																																																	
401	Araçeli Edith Randolph Muñoz	Gorros	Pieza	19.00																																																																	
11401	Citalli Barradas Fuentes	Sombrilla	Pieza	52.20																																																																	
12563	Luis Felipe Trujillo Fonseca	Cordones portagafete	Pieza	3.60																																																																	
14311	Baldemar Eleazar Hernández De Dios	Lapiceros	Pieza	5.35																																																																	
5184	Roman Chiriev	Bolsa morral de tela	Pieza	23.20																																																																	
6172	Guillermo Padilla Escamilla	Pines	Pieza	9.28																																																																	
16294	Ardiou, S.A. de C.V.	Playera	Pieza	23.20																																																																	
		Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen Consolidado la matriz de precios correspondiente a la entidad.																																																																			
		De los señalado en la observación ID 20, del presente dictamen, se constató que el sujeto obligado omitió reportar los siguientes conceptos:																																																																			
		<table><tr><th>Concepto</th><th>Cantidad</th><th>Costo Unitario con IVA</th><th>Total</th></tr><tr><td>Perifoneo</td><td>1</td><td>3,480.00</td><td>\$3,480.00</td></tr><tr><td>Pulseiras</td><td>1000</td><td>3.13</td><td>\$3,130.00</td></tr><tr><td>Vallas de acero</td><td>175</td><td>23.20</td><td>\$4,060.00</td></tr><tr><td>Fotografos</td><td>5</td><td>309.33</td><td>\$1,546.65</td></tr><tr><td>Gorra</td><td>700</td><td>29.00</td><td>\$20,300.00</td></tr><tr><td>Gorros</td><td>400</td><td>19.00</td><td>\$7,600.00</td></tr><tr><td>Sombrilla</td><td>300</td><td>52.20</td><td>\$15,660.00</td></tr><tr><td>Cordones portagafete</td><td>100</td><td>3.60</td><td>\$360.00</td></tr><tr><td>Lapiceros</td><td>100</td><td>5.35</td><td>\$535.00</td></tr><tr><td>Bolsa morral de tela</td><td>100</td><td>23.20</td><td>\$2,320.00</td></tr><tr><td>Pines</td><td>100</td><td>9.28</td><td>\$928.00</td></tr><tr><td>Playera</td><td>200</td><td>23.20</td><td>\$4,640.00</td></tr><tr><td colspan="3">Total</td><td>\$64,559.65</td></tr></table>					Concepto	Cantidad	Costo Unitario con IVA	Total	Perifoneo	1	3,480.00	\$3,480.00	Pulseiras	1000	3.13	\$3,130.00	Vallas de acero	175	23.20	\$4,060.00	Fotografos	5	309.33	\$1,546.65	Gorra	700	29.00	\$20,300.00	Gorros	400	19.00	\$7,600.00	Sombrilla	300	52.20	\$15,660.00	Cordones portagafete	100	3.60	\$360.00	Lapiceros	100	5.35	\$535.00	Bolsa morral de tela	100	23.20	\$2,320.00	Pines	100	9.28	\$928.00	Playera	200	23.20	\$4,640.00	Total			\$64,559.65							
Concepto	Cantidad	Costo Unitario con IVA	Total																																																																		
Perifoneo	1	3,480.00	\$3,480.00																																																																		
Pulseiras	1000	3.13	\$3,130.00																																																																		
Vallas de acero	175	23.20	\$4,060.00																																																																		
Fotografos	5	309.33	\$1,546.65																																																																		
Gorra	700	29.00	\$20,300.00																																																																		
Gorros	400	19.00	\$7,600.00																																																																		
Sombrilla	300	52.20	\$15,660.00																																																																		
Cordones portagafete	100	3.60	\$360.00																																																																		
Lapiceros	100	5.35	\$535.00																																																																		
Bolsa morral de tela	100	23.20	\$2,320.00																																																																		
Pines	100	9.28	\$928.00																																																																		
Playera	200	23.20	\$4,640.00																																																																		
Total			\$64,559.65																																																																		
		La determinación del costo se presenta en el anexo II-A, “Internet – Directo”																																																																			
		Derivado de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del RF, se procedió a determinar el gasto entre las campañas beneficiadas, atendiendo los criterios de distribución del artículo 218 del RF. Tal como se detalla en el “Anexo Cedula de Prorrateso 7-C13-P2”.																																																																			

Candidato de la COA (Morena, PT y PES) “Juntos Haremos Historia (Veracruz)”

**Gobernador
Cuitlahuac García Jiménez (44699)
Anexo DC_P2**

Observación	Determinación del Costo
	En virtud de lo anterior, el monto que el sujeto obligado omitió reportar en el SIF que corresponde a los candidatos del ámbito local es de \$36,219.29.

Observación		Determinación del Costo																									
Procedimientos de fiscalización		Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado en beneficio de sus candidatos, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF descrito en el apartado correspondiente del presente dictamen.																									
Monitoreo de espectaculares y propaganda en vía pública		Identificación del costo para valuación en la Matriz de Precios (Pesos)																									
28. Derivado del monitoreo, se observó que el sujeto obligado realizó gastos de propaganda en la vía pública que no fueron reportados en los informes.		Id matriz de precios		Proveedor	Concepto	Unidad de medida	Importe con IVA																				
		15793		Construquim S.A. de C.V.	Lonas menores a 12 m2	m2	\$88.07																				
		15918		Héctor Martínez Jarillo	Bardas	m2	46.40																				
		15612		Icon Act Medios SA de CV	Espectaculares	m2	384.62																				
		16022		Cobaver SA de CV	Perifoneo	Mm	3,480.00																				
		Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen Consolidado la matriz de precios correspondiente a la entidad.																									
		De los señalado en la observación ID 28, del presente dictamen, se constató que el sujeto obligado omitió reportar los siguientes conceptos:																									
		<table><tr><th>Concepto</th><th>Cantidad</th><th>Costo Unitario con IVA</th><th>Total</th></tr><tr><td>Lonas menores a 12 m2</td><td>3.75</td><td>\$88.07</td><td>\$330.26</td></tr><tr><td>Espectaculares</td><td>9</td><td>384.62</td><td>\$3,461.58</td></tr><tr><td>Perifoneo</td><td>1</td><td>3,480.00</td><td>\$3,480.00</td></tr><tr><td colspan="3">Total</td><td>\$7,271.84</td></tr></table>						Concepto	Cantidad	Costo Unitario con IVA	Total	Lonas menores a 12 m2	3.75	\$88.07	\$330.26	Espectaculares	9	384.62	\$3,461.58	Perifoneo	1	3,480.00	\$3,480.00	Total			\$7,271.84
Concepto	Cantidad	Costo Unitario con IVA	Total																								
Lonas menores a 12 m2	3.75	\$88.07	\$330.26																								
Espectaculares	9	384.62	\$3,461.58																								
Perifoneo	1	3,480.00	\$3,480.00																								
Total			\$7,271.84																								
		La determinación del costo se presenta en el anexo II-A, “Monitoreo Propaganda Via Publica– Directo” y “Monitoreo Propaganda Via Publica-Prorratio”;																									
		Derivado de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del RF, se procedió a determinar el gasto entre las campañas beneficiadas, atendiendo los criterios de distribución del artículo 218 del RF. Tal como se detalla en el “Anexo Cedula de Prorratio 7-C17-P2”.																									
		En virtud de lo anterior, el monto que el sujeto obligado omitió reportar en el SIF que corresponde a los candidatos del ámbito local es de \$5,622.99.																									

Candidato de la COA (Morena, PT y PES) “Juntos Haremos Historia (Veracruz)”

Gobernador
Cuitlahuac García Jiménez (44699)
Anexo DC_P2

Observación	Determinación del Costo																		
<p>Visitas de verificación</p> <p>Casas de campaña</p> <p>30. De la evidencia obtenida en las visitas de verificación a casas de campaña, se observaron diversos gastos que no fueron reportados en el informe.</p>	<p>Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado en beneficio de sus candidatos, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF descrito en el apartado correspondiente del presente dictamen.</p> <p style="text-align: center;">Identificación del costo para valuación en la Matriz de Precios (Pesos)</p> <table><tr><th>Id matriz de precios</th><th>Proveedor</th><th>Concepto</th><th>Unidad de medida</th><th>Importe con IVA</th></tr><tr><td>15793</td><td>Construquim S.A. de C.V.</td><td>Lona impresa terminada con doblez</td><td>m2</td><td>\$88.07</td></tr></table> <p>Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen Consolidado la matriz de precios correspondiente a la entidad.</p> <p>De los señalado en la observación ID 30, del presente dictamen, se constató que el sujeto obligado omitió reportar los siguientes conceptos:</p> <table><tr><th>Concepto</th><th>Cantidad</th><th>Costo Unitario con IVA</th><th>Total</th></tr><tr><td>Lona impresa terminada con doblez</td><td>10 m2</td><td>\$88.07</td><td>\$880.70</td></tr></table> <p>La determinación del costo se presenta en el anexo II-A, “Visitas a casa– Prorratio”</p> <p>Derivado de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del RF, se procedió a determinar el gasto entre las campañas beneficiadas, atendiendo los criterios de distribución del artículo 218 del RF. Tal como se detalla en el “Anexo Cedula de Prorratio 7-C18-P2”.</p> <p>En virtud de lo anterior, el monto que el sujeto obligado omitió reportar en el SIF que corresponde a los candidatos del ámbito local es de \$792.62.</p>	Id matriz de precios	Proveedor	Concepto	Unidad de medida	Importe con IVA	15793	Construquim S.A. de C.V.	Lona impresa terminada con doblez	m2	\$88.07	Concepto	Cantidad	Costo Unitario con IVA	Total	Lona impresa terminada con doblez	10 m2	\$88.07	\$880.70
Id matriz de precios	Proveedor	Concepto	Unidad de medida	Importe con IVA															
15793	Construquim S.A. de C.V.	Lona impresa terminada con doblez	m2	\$88.07															
Concepto	Cantidad	Costo Unitario con IVA	Total																
Lona impresa terminada con doblez	10 m2	\$88.07	\$880.70																

Observación		Determinación del Costo				
Eventos públicos 31. De la evidencia obtenida en las visitas de verificación a eventos públicos, se observaron diversos gastos que no fueron reportados en el informe.		Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado en beneficio de sus candidatos, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF descrito en el apartado correspondiente del presente dictamen.				
		Identificación del costo para valuación en la Matriz de Precios (Pesos)				
		Id matriz de precios	Proveedor	Concepto	Unidad de medida	Importe con IVA
		16022	Cobaver SA de CV	Publicidad perifoneo	Servicio	\$3,480.00
		15978	Obed Cárcamo Carmona	Servicio de batucada para eventos	Servicio	8,816.00
		15966	Bertano Castillo Viveros	Banderas De 1.0x1.0 M2 Impresas	m2	46.40
		19942	Cobaver S de RL de CV	Banderas diseño e impresión en papel bond	Pieza	8.50
		1733	Servicios Caballero SA De CV	Capa blanca de 5x5 mts.	m2	106.72
		15805	Cobaver S de RL de CV	Equipo de sonido	Servicio	7,540.00
		10436	Perylsa Suministros Y Productos Del Antequera SA De CV	Grupo musical me 5 Integrantes, 1 Cantante imitador	Servicio	5,000.01
Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen Consolidado la matriz de precios correspondiente a la entidad.		1757	Juan de Dios Rendón González	Mantas con medidas de 1.00 x 1.50 mts.	m2	87.00
		15962	Yuneisi Monserrat Medina Fernández	Playera Poliéster	Pieza	55.68
		16016	Miguel Ángel Figueroa Martínez	Sombrillas	Pieza	38.28
		15604	Black Tusk Solutions Sa De Cv	Arrendamiento de Vehículo Marca Ford Modelo Edge	Servicio	2,786.88
De los señalado en la observación ID 31, del presente dictamen, se constató que el sujeto obligado omitió reportar los siguientes conceptos:						
La determinación del costo se presenta en el anexo II-A, “Visitas a evento– Prorratio”		Concepto	Cantidad	Costo Unitario con IVA	Total	
		Publicidad perifoneo	4	3,480.00	13,920.00	
		Servicio de batucada para eventos	1	8,816.00	8,816.00	
		Banderas De 1.0x1.0 M2 Impresas	1.8	46.40	83.52	
		Banderas diseño e impresión en papel bond	100	8.50	850.00	
		Capa blanca de 5x5 mts.	13.8	106.72	1,472.74	
		Equipo de sonido	1	7,540.00	7,540.00	
		Grupo musical me 5 Integrantes, 1 Cantante imitador	1	5,000.01	5,000.01	
		Mantas con medidas de 1.00 x 1.50 mts.	1.5	87.00	130.50	
		Playera Poliéster	100	55.68	5,568.00	
Sombrillas	6	38.28	229.68			
Arrendamiento de Vehículo Marca Ford Modelo Edge	1	2,786.88	2,786.88			
			Total	46,397.33		

Candidato de la COA (Morena, PT y PES) “Juntos Haremos Historia (Veracruz)”

**Gobernador
Cuitlahuac García Jiménez (44699)
Anexo DC_P2**

Observación	Determinación del Costo
	<p>Derivado de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del RF, se procedió a determinar el gasto entre las campañas beneficiadas, atendiendo los criterios de distribución del artículo 218 del RF. Tal como se detalla en el “Anexo Cedula de Prorrateso 7-C19-P2”.</p> <p>En virtud de lo anterior, el monto que el sujeto obligado omitió reportar en el SIF que corresponde a los candidatos del ámbito local es de \$23,198.66.</p>

**Gobernador
Cuitlahuac García Jiménez (44699)
Anexo DC P2**

2236

INE/CG1275/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO SCM-RAP-97/2018

ANTECEDENTES

I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. El seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado **INE/CG1165/2018** y la resolución **INE/CG1166/2018**, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Puebla.

II. Recurso de apelación. Inconforme de las sanciones impuestas por el **Consejo General del Instituto Nacional Electoral**, el diez de agosto del dos mil dieciocho, el Partido Verde Ecologista de México presentó recurso de apelación para controvertir la parte conducente de la Resolución antes mencionada, mismo recurso que fue radicado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en la Ciudad de México (en adelante, Sala Regional) el quince de agosto del año dos mil dieciocho, quedando registrado bajo el número de expediente **SCM-RAP-97/2018**.

III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, en sesión pública celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, la Sala Regional resolvió el recurso referido, determinando lo que a la letra se transcribe:

*“**ÚNICO.** Se confirma la Resolución impugnada, por lo que hace a las conclusiones 5 C7 P1 y 5 C12 P1, así como 5 C6 P1, 5 C17 P1, 5 C 19 P1 y 5 C37 P2, para **revocarla** únicamente respecto de las diversas conclusiones*

5 C8 P1 y 5 C13 P1, en los términos y para los efectos establecidos en los últimos considerandos de esta ejecutoria.”

IV. Derivado de lo anterior, en la ejecutoria antes citada se revocó la resolución impugnada, únicamente respecto del considerando **36.4**, inciso **h)** conclusiones **5_C8_P1** y **5_C13_P1**, del resolutivo **CUARTO** de la citada Resolución, toda vez que a juicio de la Sala Regional asiste parcialmente la razón al Partido Verde Ecologista de México, pues tomando como base la determinación de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en la que redujo los montos para la imposición de las sanciones, el Consejo General determinó que, en lo tocante a las sanciones a imponer con motivo de las infracciones relacionadas; con la omisión de reportar gastos, se haría una disminución del monto de las sanción de las mismas del ciento cincuenta al cien por ciento (150% al 100%) del monto involucrado, sin embargo la autoridad fiscalizadora fue omisa en aplicar dicho criterio de sanción en las conclusiones que fueron revocadas, por tal motivo, y de conformidad al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c), d), g) y o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de Acuerdo correspondiente.

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j), aa) y jj); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de los ingresos y egresos de los partidos políticos.

2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso, el Recurso de Apelación identificado con el número de expediente **SCM-RAP-97/2018**.

3. Que la Sala Regional resolvió revocar la Resolución **INE/CG1166/2018** en los términos referidos por el citado fallo, por lo que, a fin de dar debido cumplimiento a la sentencia de mérito, se procederá a atender a cabalidad las bases establecidas en la ejecutoria precisada.

4. En ese sentido, en el Considerando QUINTO del apartado de **ESTUDIO DE FONDO** de la ejecutoria dictada en el recurso de apelación identificado bajo el número de expediente **SCM-RAP-97/2018**, la Sala Regional determinó lo que a continuación se transcribe:

*“**QUINTO. Estudio de fondo.** Previo al análisis de los agravios planteados por el Recurrente, este órgano jurisdiccional estima necesario precisar el marco jurídico aplicable al caso.*

(...)

II. Respuesta al Recurrente.

Conforme a la metodología planteada, este órgano jurisdiccional llevará a cabo en primer lugar el análisis de los motivos de disenso planteados por el Recurrente con relación a las sanciones que se le impusieron con motivo de las conclusiones 5 C8 P1 y 5 C13 P1, en los cuales se duele de que la Resolución impugnada es incongruente, pues mientras en el apartado de consideraciones se sostiene que las sanciones a imponer con motivo de gastos no reportados equivaldrían del cien por ciento (100%) del monto involucrado, en los Puntos Resolutivos se le imponen sanciones que corresponden al ciento cincuenta por ciento (150%) de la cantidad no reportada, lo que además implica una indebida fundamentación y motivación de aquélla. A juicio de esta Sala Regional, es fundado el agravio hecho valer por el Recurrente, como a continuación se explica y analiza.

Es importante precisar que el Actor no controvierte la acreditación de la conducta, sino que –por el contrario– la reconoce; luego, sus motivos de disenso los endereza solo por cuanto hace a la individualización de la sanción y respecto de tomar como parámetro para su imposición el ciento cincuenta por ciento (150%) del total del monto involucrado.

Al respecto, debe decirse que el principio de congruencia se encuentra tutelado en el artículo 17 de la Constitución, el cual prevé que toda decisión de los órganos encargados de impartir justicia debe tener una relación lógica entre las consideraciones que contenga la sentencia; es decir, que no sean contradictorias entre sí o con los Puntos Resolutivos –congruencia interna–, así

como con lo planteado por las partes, sin omitir o introducir cuestiones ajenas a la controversia planteada –congruencia externa–, tal como se establece en la jurisprudencia 28/2009, 12 de rubro: “CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA”, criterio que si bien se refiere a las sentencias resulta aplicable, por identidad jurídica sustancial, a las resoluciones que emitan las autoridades administrativas.

En el caso, para calificar la falta como grave ordinaria, en la Resolución impugnada se señalaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la normativa aplicable que llevaron a dicha conclusión. En consecuencia, el Consejo responsable determinó que el monto involucrado en cada conclusión sancionatoria ascendía, respectivamente, a cincuenta y dos mil pesos 00/100 M.N. (\$52,000.00) y a doscientos noventa y ocho mil pesos 00/100 M.N. (\$298,000.00).

No obstante, luego de establecer que la sanción a imponer debía ser de índole económica, determinó hacerlo por el ciento cincuenta por ciento (150%) del monto involucrado, esto es, por los montos de setenta y ocho mil pesos 00/100 (\$78,000.00) y cuatrocientos cuarenta y siete mil pesos 00/100 (\$447,000.00), respectivamente.

Por consecuencia, en cada caso el Consejo General concluyó imponer al Recurrente la sanción prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III, de la Ley Electoral, consistente en una reducción del cincuenta por ciento (50%) por concepto de financiación pública para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar las cantidades referidas en el párrafo anterior.

Lo anterior sin tomar en consideración que en la fracción XXXIII del apartado de ANTECEDENTES de la propia Resolución impugnada, se sostuvo lo siguiente:

‘EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE PROCEDIÓ A FORMULAR EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN, EL CUAL FUE APROBADO EN LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA TREINTA DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, POR LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR MAYORÍA DE CUATRO VOTOS A FAVOR DE LA CONSEJERA ELECTORAL DRA. ADRIANA FAVELA HERRERA Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES DR. BENITO NACIF HERNÁNDEZ, MTRO. MARCO ANTONIO BAÑOS MARTÍNEZ Y EL CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EL DR. CIRO MURAYAMA RENDÓN Y CON UN VOTO EN CONTRA DE LA CONSEJERA ELECTORAL LIC. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES.

EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN, SE MODIFICAN LOS CRITERIOS DE SANCIÓN PROPUESTOS POR LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN PARA QUEDAR COMO SIGUE:

- a. EL EGRESO NO REPORTADO SE SANCIONA CON EL 100% DEL MONTO INVOLUCRADO EN CADA CONDUCTA.
- b. EL EGRESO NO COMPROBADO QUE VULNERA ÚNICAMENTE EL ARTÍCULO 127 DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN, SE SANCIONA CON EL 50% DEL MONTO INVOLUCRADO EN CADA CONDUCTA.
- c. EL EVENTO REGISTRADO DE MANERA EXTEMPORÁNEA, PERO ANTES DE SU CELEBRACIÓN SE SANCIONA CON 1 UMA.
- d. EL EVENTO REGISTRADO DE MANERA EXTEMPORÁNEA Y DESPUÉS DE SU CELEBRACIÓN SE SANCIONA CON 5 UMA.
- e. LAS SANCIONES IMPUESTAS DEBERÁN EJECUTARSE DE MANERA TAL QUE LA RETENCIÓN MÁXIMA DE LA MINISTRACIÓN MENSUAL DE FINANCIAMIENTO ORDINARIO NO EXCEDA EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DE LA MINISTRACIÓN QUE RECIBAN LOS SUJETOS OBLIGADOS.’

De la transcripción anterior se obtiene que, tal como lo argumenta el Recurrente, tomando como base la determinación de la Comisión de Fiscalización del INE, en la que redujo los montos para la imposición de las sanciones, el Consejo General determinó que, en lo tocante a las sanciones a imponer con motivo de las infracciones relacionadas con la omisión de reportar gastos, se haría una disminución del monto de las mismas del ciento cincuenta al cien por ciento (150 al 100%) del monto involucrado.”

En este punto, importa precisar que si bien tanto la Sala Superior¹³ como esta Sala Regional¹⁴ se han pronunciado en el sentido de que “ES VÁLIDO (para el Consejo General) AMPLIAR LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES (propuestas por la Comisión de Fiscalización del INE) CON RESPECTO AL MONTO INVOLUCRADO”, se estima que tal criterio no resulta aplicable en la especie, cuenta habida que en el presente caso fue el propio Consejo responsable el que previo a la aprobación de la Resolución impugnada se pronunció en el sentido de que las multas a imponer equivaldrían al cien por ciento (100%) del monto involucrado, conforme a lo aprobado por la mencionada Comisión.

En efecto, del análisis de la versión estenográfica de la sesión del Consejo General en la que se emitió la Resolución impugnada,¹⁵ esta Sala Regional advierte que durante la discusión y aprobación del punto dos (2) de la orden del día de dicha sesión,¹⁶ el Consejo responsable aprobó por mayoría de ocho (8) votos a favor el criterio relativo a la disminución del monto de las multas,¹⁷ tal como se desprende de la siguiente transcripción:

‘AHORA, SOMETO A SU CONSIDERACIÓN LOS CRITERIOS CON LOS CUALES SE HICIERON LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y LAS CONSECUENCIAS, OBVIAMENTE DE LOS MISMOS.

QUIENES ESTÉN A FAVOR DE APROBARLO EN LOS TÉRMINOS EN QUE ESTÁN EN LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN, SÍRVANSE MANIFESTARLO, SI SON TAN AMABLES. COMO VIENEN LOS PROYECTOS CON LOS CRITERIOS.

8 VOTOS.

¿EN CONTRA?

3 VOTOS.

APROBADOS POR 8 VOTOS A FAVOR Y 3 VOTOS EN CONTRA’

Conforme a lo antes trasunto, es evidente para esta Sala Regional que, con independencia de lo aprobado por la Comisión de Fiscalización, el Consejo responsable aprobó los criterios respecto del monto de las sanciones a imponer, de ahí que los mismos le resultaban vinculantes.

Luego, si el Consejo responsable no tomó en cuenta la reducción aprobada para efectos de imponer las sanciones respectivas la Actor, porque lo hizo sobre la base de un ciento cincuenta por ciento (150%) del monto involucrado, es indudable que incurrió en una falta de congruencia, de ahí lo fundado del agravio.

No obsta a lo anterior, el hecho que en la misma resolución se hubiere indicado que para el caso de que se mencionara un monto diferente debería prevaler tal criterio, puesto que ello no genera certeza para el Recurrente por cuanto al monto que corresponde a la sanción, así como los efectos de la misma respecto de su financiación pública, además de que tampoco se explica en la Resolución impugnada cuáles serían los mecanismos o metodología para que el Actor pudiera hacer valer o reclamar los ajustes a las cantidades autorizadas, lo que también genera incertidumbre respecto a lo que habrá de descontarse de dicha financiación.

Por tanto, con la finalidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al Recurrente respecto del monto involucrado –así como del que podrá disponer– en la imposición de la sanción en comentario, a juicio de esta Sala Regional procede revocar parcialmente la Resolución impugnada en cuanto a las conclusiones objeto de análisis.

(...)”

Asimismo, mediante el Considerando SEXTO **Efectos**, de la ejecutoria dictada en el recurso de apelación en comento, la Sala Regional determinó lo que a continuación se transcribe:

“SEXTO. Efectos. Toda vez que al haber resultado fundado el agravio planteado por el Recurrente solo por lo que hace a la falta de congruencia de la Resolución impugnada respecto de las conclusiones **5 C8 P1** y **5 C13 P1**, esta Sala Regional revocó en esa parte la mencionada resolución, procede precisar los efectos del fallo protector, con fundamento en los artículos 17 y 99 de la Constitución, que imponen el deber de impartir justicia de manera pronta, completa e imparcial; 6 de la Ley de Medios, que establece la facultad decisoria plena de las Salas Electorales, considerando que la justicia es completa hasta que se ejecuten las sentencias y que dicha ejecución se torna más asequible en tanto se fijan con la mayor claridad los efectos jurídicos consecuentes con las decisiones tomadas y los argumentos en que descansan; así como en lo dicho por la Sala Superior en la **tesis XXVII/2003**, 21 de rubro: **“RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. MODALIDADES EN SUS EFECTOS PARA PRESERVAR EL INTERÉS GENERAL”**.

De conformidad con lo expuesto, se fijan los efectos correspondientes, conforme a los cuales el Consejo General deberá implementar las acciones siguientes:

-En un plazo no mayor a **veinte días** naturales contados a partir de la legal notificación de esta ejecutoria, deberá emitir una nueva resolución debidamente fundada y motivada, la cual deberá ser coherente con lo decidido por la Comisión de Fiscalización en cuanto a la reducción de los montos a considerar para la imposición de las sanciones respectivas.

-Hecho lo anterior, deberá notificar personalmente al Recurrente la nueva resolución dentro de los tres días naturales siguientes al de su dictado, en garantía de su derecho fundamental de audiencia conforme a lo previsto en los artículos 1º párrafos primero y tercero, y 14 párrafo segundo de la Constitución.

-Informar de ello a este órgano jurisdiccional en los tres días naturales subsecuentes.

(...)”

Lo anterior, a efecto de que esta autoridad emita una nueva determinación considerando lo expuesto por la Sala Regional, por lo que este Consejo General procederá a acatar la sentencia, para lo cual, en congruencia con el sentido de la ejecutoria de mérito, se realizarán las siguientes modificaciones a la resolución impugnada:

Conclusión	
Conclusión original 5_C8_P1	<i>“El sujeto obligado omitió presentar la casa de campaña y su respectivo registro contable, por un importe de \$52,000.00.”</i>
Conclusión original 5_C13_P1	<i>“El sujeto obligado omitió presentar la casa de campaña y su respectivo registro contable, por un importe de \$298,000.00”</i>
Efectos	Que la autoridad electoral reajuste la cuantificación de la sanción impuesta tomando en consideración la revocación parcial de la multa impuesta por virtud de las conclusiones 5_C8_P1 y 5_C13_P1.
Acatamiento	Toda vez que a juicio de la Sala Regional asiste parcialmente la razón al Partido Verde Ecologista de México, se deberá re individualizar la sanción de las conclusiones 5_C8_P1 y 5_C13_P1 en una nueva resolución la cual deberá ser coherente con lo decidido por la Comisión de Fiscalización en cuanto a la reducción de los montos a considerar para la imposición de las sanciones respectivas cambiando el criterio de sanción del 150% al 100%.

5. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las condiciones socio económicas del ente infractor.

Bajo esta tesitura, debe considerarse que el partido político sujeto al procedimiento de fiscalización que cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que, en su caso, se les imponga, toda vez que mediante el Acuerdo CG/AC-039/17 emitido por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Puebla, se les asignó como financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2018, el monto siguiente:

Partido Político	Financiamiento público actividades ordinarias 2018
Partido Verde Ecologista de México	\$16,672,996.07

En este orden de ideas, y de acuerdo al criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es idóneo que esta autoridad considere, para efecto de la imposición de las sanciones que pudieran determinarse,

la capacidad económica de los partidos políticos derivada del financiamiento público federal para actividades ordinarias¹, resultando .

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido mediante oficio INE/UTVOPL/6705/2018 el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales remitió el oficio IEE/PRE/3827/18 suscrito por el Lic. Jacinto Herrera Serrallonga, Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Puebla mediante el cual informó que el Partido Verde Ecologista de México no tiene saldos pendientes de pago.

Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que el partido político con financiamiento local tiene la capacidad económica suficiente con la cual puede hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérsele en la presente Resolución.

En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente para el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político, pues aun y cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean establecidas conforme a la normatividad electoral.

Ahora bien, con la finalidad de no afectar las actividades ordinarias del partido político infractor, el pago de las sanciones económicas que en su caso se impongan se realizará en términos del Acuerdo **INE/CG61/2017**.

Esto es, las sanciones económicas impuestas con base en la capacidad económica estatal, deberán ejecutarse por el Organismo Público Local de la entidad federativa,

¹ Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con financiamiento público local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin recursos económicos para llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente.

para lo cual dicho organismo deberá considerar, en términos de lo dispuesto en el **Lineamiento Sexto, apartado B del Acuerdo INE/CG61/2017**, lo siguiente:

- Una vez que las sanciones impuestas por la autoridad electoral nacional queden firmes, sea por determinación de la autoridad jurisdiccional correspondiente o por que las mismas no hayan sido materia de impugnación, las sanciones se harán efectivas a partir del mes siguiente en que queden firmes.
- De conformidad con lo anterior, el Organismo Público Local deberá llevar el registro de las notificaciones realizadas a los sujetos obligados en la entidad federativa correspondiente, de las sanciones impuestas con cargo al financiamiento público estatal, en los formatos que para tal efecto proporcione la Dirección Jurídica de este Instituto, en cumplimiento del artículo Transitorio PRIMERO del Acuerdo INE/CG61/2017.

El área competente de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales informará a los Organismos las sanciones que hayan quedado firmes.

Para lo anterior, la Unidad Técnica de Vinculación deberá remitir oportunamente las constancias de notificación correspondientes a la Dirección Jurídica.

- Para la ejecución de las sanciones el Organismo Público Local deberá considerar un descuento económico que no puede exceder del 25% (veinticinco por ciento) del financiamiento público mensual que reciba el instituto político en la entidad para el desarrollo de sus actividades ordinarias.

Conforme lo anterior, el Organismo Público Local fijará las sanciones a ejecutar en el mes correspondiente; considerando en todo momento, que de existir un conjunto de sanciones firmes pendientes de cobro por un importe superior al 25% del financiamiento público del partido político, éstas deberán ser cobradas conforme al orden en que quedaron firmes, en el entendido que no podrá descontarse un importe menor al equivalente al porcentaje antes mencionado; por lo que de acuerdo al monto de sanción, podrá acumular para su ejecución el número de sanciones necesarias hasta que queden completamente pagadas.

- Las sanciones impuestas y cobradas con recursos provenientes del financiamiento público estatal deberán de ser destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia,

tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en términos de las disposiciones aplicables, por lo que se estará a lo establecido en el resolutivo respectivo, en términos de lo dispuesto en el Lineamiento Sexto, Apartado B, numeral 2 del Acuerdo INE/CG61/2017.

- El Organismo Público Local verificará en el plazo de 15 días hábiles siguientes a que estén firmes las sanciones impuestas a los precandidatos, si los sujetos obligados realizaron el pago de forma voluntaria; para lo cual deberá atender la forma de pago que ordene la presente Resolución; para ello, dicho Organismo pondrá a disposición de los sujetos obligados las formas o procedimientos que les faciliten realizar el pago.
- Los OPLE deberán emitir un informe al corte de cada mes, que contenga las sanciones cobradas en dicho periodo, mismo que será hecho del conocimiento de la Unidad de Vinculación del Instituto, en términos de lo dispuesto en el Lineamiento Sexto, Apartado B, numeral 2 del Acuerdo INE/CG61/2017.
- Por otra parte, en caso que las sanciones económicas sean impuestas con base en la capacidad económica federal, deberá procederse en términos de lo dispuesto en el Acuerdo INE/CG61/2017, en lo específico en el Lineamiento Sexto, apartado B, numeral 1, incisos c) y d) en relación al Apartado A del mismo Lineamiento.
- Las sanciones impuestas y cobradas deberán de ser destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en términos de las disposiciones aplicables.

6. Modificación a la Resolución INE/CG1166/2018.

En cumplimiento con lo mandatado por la Sala Regional, se procede a modificar la resolución **INE/CG1166/2018** en lo tocante a su considerando **36.4**, en los siguientes términos:

36.4 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

(...)

h) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones **5_C8_P1** y **5_C13_P1**.

(...)

h) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras del artículo 143 Ter del Reglamento de Fiscalización:

No.	Conclusión	Monto involucrado
5_C8_P1	<i>"El sujeto obligado omitió presentar la casa de campaña y su respectivo registro contable, por un importe de \$52,000.00"</i>	\$52,000.00
5_C13_P1	<i>"El sujeto obligado omitió presentar la casa de campaña y su respectivo registro contable, por un importe de \$298,000.00"</i>	\$298,000.00

En consecuencia, al omitir realizar el registro contable de los gastos por el uso o goce temporal de los inmuebles utilizados como casas de campaña, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 143 Ter del Reglamento de Fiscalización por un importe de **\$350,000.00** (trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N)

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en la observación de mérito, se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, a partir del momento de la notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara las irregularidades detectadas.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los candidatos involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña materia de estudio, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6, del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de sus candidatos las observaciones que se detallan en el oficio referido en el análisis de

las conclusiones. Esto, a efecto que los candidatos presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido, mediante requerimiento al instituto político correspondiente, con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito y así, salvaguardar la garantía de audiencia y que los candidatos contaran con la oportunidad de preparar una adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de las sanciones correspondientes, determinar la **responsabilidad de los sujetos obligados** en las consecuencias de las conductas materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el capítulo III *“DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS”* de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“El candidato es*

responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refiere el inciso anterior”

De lo anterior se desprende que no obstante que el partido político haya omitido registrar gastos, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad de los candidatos en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los candidatos y los partidos, pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y egresos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea al partido político y candidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.²

En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe

² Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.

la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y es en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta infracción.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

“Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.-

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia;

d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.”

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados

Consecuentemente, las respuestas del sujeto obligado no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al ente infractor de su responsabilidad ante las conductas observadas, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al sujeto obligado, pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado las diversas conductas que violentan el artículo 143 Ter del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra el mismo bien jurídico tutelado; por cuestión de método, para facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten.

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión)
- b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando **veintiuno** de la presente Resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar las faltas (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

En relación con las irregularidades identificadas en las conclusiones analizadas del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar los egresos correspondientes a la adquisición del uso o goce temporal de aquellos bienes inmuebles utilizados como casas de campaña y realizados durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

En el caso a estudio, las faltas corresponden a **omisiones** del sujeto obligado consistentes en omitir reportar gastos realizados en virtud de la utilización de inmuebles como casas de campaña, durante la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 143 Ter del Reglamento de Fiscalización.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

Modo: El sujeto obligado omitió reportar en el Informe de Campaña el egreso relativo a la **adquisición del uso o goce temporal de los bienes inmuebles utilizadas como casa de campaña.**

De ahí que el partido contravino lo dispuesto en el artículo 143 Ter del Reglamento de Fiscalización.

Descripción de las Irregularidades observadas
Conclusión 5_C8_P1. <i>"El sujeto obligado omitió presentar la casa de campaña y su respectivo registro contable, por un monto de \$52,00.00"</i>
Conclusión 5_C13_P1 <i>"El sujeto obligado omitió presentar la casa de campaña y su respectivo registro contable, por un monto de \$298,000.00"</i>

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al sujeto obligado surgieron de la revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Egresos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario

Lugar: Las irregularidades se actualizaron en el estado de Puebla.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Es importante señalar que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse faltas sustanciales por omitir reportar los gastos aludidos, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas en el origen de los recursos.

Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito traen consigo la no rendición de cuentas, impiden garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados, además de tutelares bienes jurídicos tales como la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia electoral.

Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.

Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente³:

- Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio.
- Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
- Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado.
- La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
- Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y comparable.

³ Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-4/2016.

Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, valorará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.

Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.

En ese tenor, se considera que para efectos de determinar el valor de un bien o servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación comprobatoria.

Al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados por la norma consistentes en la legalidad y adecuado control de los recursos como principio rector de la actividad electoral; esto es, al omitir reportar los egresos por concepto de la adquisición de uso o goce temporal de los inmuebles utilizados como casa de campaña, en desatención al artículo 143 Ter, del Reglamento de Fiscalización, se acredita la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.

En este orden de ideas de las conclusiones que se analizan el sujeto obligado vulneró lo dispuesto en el artículo 143 Ter del Reglamento de Fiscalización⁴.

⁴ “Artículo 143 ter. 1. Los sujetos obligados deberán registrar, en el medio que proporcione el Instituto, las casas de precampaña, de obtención de apoyo ciudadano y de campaña que utilicen, proporcionando la dirección de la misma, así como el periodo en que será utilizada. Adicionalmente tendrán que anexar la documentación comprobatoria correspondiente ya sea si se trata de una aportación en especie o de un gasto realizado. 2. En el periodo de campaña se deberá registrar al menos un inmueble. En caso de que el bien inmueble empleado sea un comité del partido político que corresponda, deberá contabilizarse de manera proporcional y racional a los gastos que el uso del mismo genere a las campañas como transferencias en especie del respectivo Comité por el tiempo en que sea utilizado el inmueble.”

Del artículo señalado se desprende que los sujetos obligados tienen la obligación de registrar por lo menos un bien inmueble el cual sea utilizado como casa de campaña, y en consecuencia, reportar en su informe de ingresos y gastos de campaña aquellas erogaciones realizadas en virtud de la adquisición del uso o goce temporal del mismo, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad de dicha disposición es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la legalidad y el adecuado control de recursos mediante la obligación relativa al registro contable de las erogaciones conducentes en los informes, lo cual implica, que los sujetos obligados rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido vulnera directamente la legalidad y el adecuado control de recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Así, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma todos los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, siendo en el caso específico, aquellas erogaciones concernientes a la adquisición del uso o goce temporal de inmueble alguno utilizado para el desarrollo de sus actividades de campaña (casa de campaña), otorgando en consecuencia una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la hipótesis normativa prevista en el artículo 143 Ter del Reglamento de Fiscalización, siendo esta norma de gran trascendencia para la tutela de los principios de legalidad y adecuado control de los recursos.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta señalada en la conclusión analizada es la legalidad y el adecuado control de los recursos de los sujetos obligados para el desarrollo de sus fines.

En el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado infractor se traduce en **faltas** de resultado que ocasiona un daño directo y real de los bienes jurídicos tutelados, arriba señalados.

En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en **faltas de fondo**, cuyo objeto infractor concurre directamente en tener legalidad y un adecuado control de los recursos erogados por el sujeto obligado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los sujetos obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en **faltas** de carácter **SUSTANTIVO o de**

FONDO, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la legalidad y el adecuado control de los recursos por el partido infractor.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de las conductas a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que las infracciones deben calificarse como **GRAVES ORDINARIAS**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente.

Conclusión 5 C8 P1

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar los egresos realizados a fin de adquirir el uso o goce temporal de los bienes inmuebles utilizados como casas de campaña.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos aludidos realizados durante la campaña en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$52,000.00** (cincuenta y dos mil pesos 00/100 M.N.).
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁵

⁵ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes,

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a) fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica equivalente al **100%** (cien por ciento) sobre el monto involucrado que asciende a la cantidad de **\$52,000.00** (cincuenta y dos mil pesos 00/100 M.N.)

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Verde Ecologista de México, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción hasta del **25%** (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$52,000.00** (cincuenta y dos mil pesos 00/100 M.N.)

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Conclusión 5 C13 P1

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por

o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar los egresos realizados a fin de adquirir el uso o goce temporal de los bienes inmuebles utilizados como casas de campaña.

- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos aludidos realizados durante la campaña en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$298,000.00** (doscientos noventa y ocho mil pesos 00/100 M.N.).
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁶

⁶ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a) fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica equivalente al **100%** (cien por ciento) sobre el monto involucrado que asciende a la cantidad **\$298,000.00** (doscientos noventa y ocho mil pesos 00/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Verde Ecologista de México, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción hasta del **25%** (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$298,000.00** (doscientos noventa y ocho mil pesos 00/100 M.N.).

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

(...)

RESUELVE

(...)

CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando **36.4** de la presente Resolución, se imponen al **Partido Verde Ecologista de México**, las siguientes sanciones:

(...)

h) **2** Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones

Conclusión 5 C8 P1

Una reducción hasta del **25%** (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$52,000.00** (cincuenta y dos mil pesos 00/100 M.N.).

Conclusión 5 C13 P1

Una reducción hasta del **25%** (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$298,000.00** (doscientos noventa y ocho mil pesos 00/100 M.N.).

(...)

7. Que la sanción originalmente impuesta al **Partido Verde Ecologista de México** en el inciso **h)** conclusiones **5_C8_P1** y **5_C13_P1** del considerando **36.4** de la Resolución **INE/CG1166/2018** resolutive **CUARTO**, tuvieron las modificaciones que se reflejan de la siguiente manera:

Resolución INE/CG1166/2018		Acuerdo por el que se da cumplimiento al SCM-RAP-97/2018	
Inciso h) Conclusión 5_C8_P1	Sanción	Inciso h) Conclusión 5_C8_P1	Sanción
“El sujeto obligado omitió presentar la casa de campaña y su respectivo registro contable, por un monto de \$52,00.00”	Conclusión 5_C8_P1 \$78,000.00 (setenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.).	“El sujeto obligado omitió presentar la casa de campaña y su respectivo registro contable, por un monto de \$52,00.00”	Conclusión 5_C8_P1 \$52,000.00 (cincuenta y dos mil pesos 00/100 M.N.).
“El sujeto obligado omitió presentar la casa de campaña y su respectivo registro contable, por un monto de \$298,000.00”	Conclusión 5_C13_P1 \$447,000.00 (cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.)	“El sujeto obligado omitió presentar la casa de campaña y su respectivo registro contable, por un monto de \$298,000.00”	Conclusión 5_C13_P1 \$298,000.00 (doscientos noventa y ocho mil pesos 00/100 M.N.).

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

A C U E R D A

PRIMERO. Se modifica la parte conducente de la Resolución **INE/CG1166/2018**, aprobada en sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Puebla, en los términos precisados en los Considerandos **6** y **7** del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Notifíquese el contenido del presente Acuerdo al Partido Verde Ecologista de México.

TERCERO. Infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de México, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SCM-RAP-97/2018** dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo.

CUARTO. En términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya causado estado; y los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas en la presente determinación, serán destinados organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, en los términos de las disposiciones aplicables.

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1276/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE SCM-RAP-108/2018

A N T E C E D E N T E S

I. Aprobación de la Resolución. El seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria la resolución **INE/CG1031/2018**, respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización, instaurada en contra del C. José Pedro Kumamoto Aguilar, entonces Candidato Independiente al Senado de la República en el estado de Jalisco; la C. Juana Adelfa Delgado Quintana entonces Candidata Independiente al Senado de la República Por Jalisco; la C. Paola Flores Trujillo Entonces Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 13; el C. Oswaldo Ramos López, Entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 19; el C. José de Jesús Martínez Esparza entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 4; la C. Alejandra Vargas Ochoa Entonces Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 6; la C. Susana Gabriela Velasco González entonces Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por El Distrito 5; el C. Luis Ángel Morales Hernández Entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 7; la C. Susana de la Rosa Hernández entonces Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 8; la C. Susana Ochoa Chavira Entonces Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 10; el C. José Bernardo Masini Aguilera entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 14; el C. Pablo Ricardo Montaña Bekmann Entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Federal por el Distrito 8; el C. Rodrigo Cerda Cornejo entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Federal por el Distrito 10 y el C. Alberto Valencia Bañuelos entonces Candidato Independiente A Diputado Federal por el Distrito 13, Todos del Estado de Jalisco; así como contra el C. Roberto Alejandro Castillo Cruz entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 26 de la Ciudad De México; la C. Alejandra Natzieli Martínez del Toro Entonces Candidata

Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 6 en el Estado De Nuevo León y el C. Julio Adrián Gorocica Rojas Entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 4, en el estado de Yucatán, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/113/2018.

II. Recurso de apelación. Inconforme de las sanciones impuestas por el **Consejo General del Instituto Nacional Electoral**, el diecinueve de agosto del dos mil dieciocho, el C. Roberto Alejandro Castillo Cruz presentó recurso de apelación para controvertir la parte conducente de la Resolución antes mencionada, mismo recurso que fue radicado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en la Ciudad de México (en adelante, Sala Regional) el veintisiete de agosto del año dos mil dieciocho, quedando registrado bajo el número de expediente **SCM-RAP-108/2018**.

III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, en sesión pública celebrada el seis de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Regional resolvió el recurso referido, determinando lo que a la letra se transcribe:

“ÚNICO. Revocar Parcialmente la RESOLUCIÓN IMPUGNADA, para los efectos precisados en esta sentencia.”

IV. Derivado de lo anterior, en la ejecutoria antes citada se revocó la resolución impugnada, únicamente respecto del Considerando 3, **Apartado F. Ingreso no reportado por conceptos de licencia “G suite” y modificaciones por conteo rápido del dominio vamosareemplazarles.mx y Apartado H. Imposición de la Sanción**, toda vez que a juicio de la Sala Regional asiste la razón al C. Roberto Alejandro Castillo Cruz, pues la autoridad fiscalizadora se limitó a establecer, que era necesaria la Licencia “G Suite” para tener un dominio, sin mayores razonamientos ni elementos de convicción que llevaran a concluir que efectivamente el servicio por licencias “G Suite” es indispensable para hacer modificaciones a una página, así mismo menciona que es incorrecta la apreciación que, si bien, catorce de los diecisiete candidatos realizaron un reporte por concepto de la aportación en especie consistente en Modificaciones al conteo rápido del Sitio Web, los tres restantes, incluyendo el recurrente, hubieran incurrido en una omisión, en razón de que no existe ningún elemento de convicción con el cual se compruebe fehacientemente que el sujeto obligado utilizó el sistema de modificaciones al conteo rápido de dicho sitio, ello con independencia de que su imagen se expusiera en el referido portal, lo anterior, porque tal circunstancia no fue posible desprender que realizó modificaciones por conteo rápido, por tal motivo, y de conformidad al

artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c), d), g) y o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de Acuerdo correspondiente.

V. Solicitud de Información al Representante Legal de Soluciones y Herramientas en la Nube S. de R.L. de C.V.

a) El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo el director de la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Jalisco, requiriera al C. Andrés Barrios Arenas, información sobre la contratación de servicios por concepto de Licencia G Suite, con el entonces candidato el C. Roberto Alejandro Castillo Cruz.

b) El siete de septiembre de dos mil dieciocho, la Junta Local Ejecutiva, solicito lo referido al C. Andres Barrios Arenas, representante legal de Soluciones y Herramientas en la Nube S. de R.L. de C.V.

c) El diez de septiembre de dos mil dieciocho, el Representante Legal de Soluciones y Herramientas en la Nube S. de R.L. de C.V., contesto a lo solicitado, en su parte conducente de la siguiente manera:

“Roberto Alejandro Castillo Cruz no celebró contrato por el concepto de Licencias G Suite, dicho candidato celebró un contrato de prestación de servicios con la empresa que represento correspondiente al servicio de adaptaciones en el dominio www.vamosareemplazarles.mx.

(...)

Es menester señalar a esta autoridad que la funcionalidad de conteo rápido del día de la Jornada Electoral sólo benefició a las y los candidatos conteniendo en el estado de Jalisco.”

VI. Solicitud de Información a Titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática del Instituto Nacional Electoral.

a) El siete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio identificado con la clave alfanumérica INE/UTF/DRN/1271/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Ing. Jorge Humberto Torres Antuñiano Titular de la Unidad Técnica de

Servicios de Informática del Instituto Nacional Electoral, señalar si es posible que una persona que no cuenta con licencias de una página web, realice modificaciones a la misma, así mismo que detallará si los conceptos de licencia, modificaciones y adaptaciones de una página web están relacionados entre sí y si alguno de ellos tiene que ser del que deriven los demás.

b) El diez de septiembre de dos mil dieciocho mediante oficio identificado con el número **INE / UNICOM / 5004 /2018**, signado por el Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano, contestó a lo solicitado, en su parte conducente de la siguiente manera:

“(…)

*A partir de esta definición general, se desprende que, para algunos de los esquemas de gestión de páginas web, **no es necesario contar con licencias de una "página web" para realizar modificaciones a la misma**; esto en virtud de que dicha "página web" puede ser modificada mediante uno de los múltiples editores de páginas web disponibles tanto comercial como gratuitamente. Esto será siempre dependiente del esquema de gestión u hospedaje de la página web y puede variar de una empresa a otra.*

Adicionalmente a lo señalado hasta este punto, es importante tener en cuenta que para llevar a cabo la publicación en internet de una "página web", se requiere contar con algún tipo de servicio que "de hospedaje" a la misma. Existe una amplia oferta para llevar a cabo dicho hospedaje, existiendo una gran variedad de servicios en internet que prestan esta facilidad de manera gratuita o por un monto determinado. El acceso a dicha página web será a través de una dirección electrónica (URL) específica.

(…)

a. Contexto general. Como se señaló en la respuesta al punto anterior, atendiendo el razonamiento más general, es posible señalar que los conceptos de licencia, modificaciones y adaptaciones de una página web no están relacionados entre sí; así mismo, no necesariamente de alguno de ellos tienen que derivar los demás.

En este sentido se precisa que se pueden llevar a cabo las modificaciones y adaptaciones de una página web (siempre dependiente del esquema de gestión de páginas web, mismo que puede variar de fabricante a fabricante) sin necesidad de contar con algún tipo de licencia.

(…)”

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j), aa) y jj); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de los ingresos y egresos de los partidos políticos.
2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso, el Recurso de Apelación identificado con el número de expediente **SCM-RAP-108/2018**.
3. Que la Sala Regional resolvió revocar la Resolución **INE/CG1031/2018** en los términos referidos por el citado fallo, por lo que, a fin de dar debido cumplimiento a la sentencia de mérito, se procederá a atender a cabalidad las bases establecidas en la ejecutoria precisada.
4. En ese sentido, en el Considerando TERCERO del apartado de **ESTUDIO DE FONDO** de la ejecutoria dictada en el recurso de apelación identificado bajo el número de expediente **SCM-RAP-108/2018**, la Sala Regional determinó lo que a continuación se transcribe:

“TERCERO. Estudio de Fondo

(...)

-Licencia “G suite”

Ahora bien, en el presente caso, la AUTORIDAD RESPONSABLE estableció en la RESOLUCIÓN IMPUGNADA que el PROMOVENTE incurrió en la omisión de reportar el ingreso generado por concepto de la licencia “G Suite”, debido a que, del análisis realizado a su contabilidad ingresada en el SIF, se pudo vislumbrar que no se contaba con dichos reportes.

Lo anterior, con el argumento de que la licencia “G suite” corresponde a un paquete de servicios basados en la nube que un proveedor puede proporcionar a una organización, y que para acceder a la misma se necesita un DOMINIO.

Esto es, que sin existir una contratación previa por licencias, adujo que no podrían existir las contrataciones subsecuentes, en este caso, las contrataciones por adaptaciones que el RECURRENTE sí reportó.

Dicho de otra manera, el CONSEJO GENERAL llegó a la determinación de sancionar al PROMOVENTE, considerando que es necesario contar con una licencia “G Suite” para el uso del DOMINIO www.vamosareemplazarles.mx. Es decir, al observarse registros sobre diversas contrataciones relacionadas con adaptaciones del DOMINIO en el mes de mayo y junio, la AUTORIDAD RESPONSABLE adujo que el mismo tuvo que haber contado con la multicitada licencia, pues de lo contrario era imposible efectuar las adaptaciones reportadas.

En consecuencia, a consideración de esta Sala Regional, el estudio realizado por parte de la responsable se limitó a establecer, que era necesaria la Licencia “G Suite” para tener un DOMINIO, sin mayores razonamientos ni elementos de convicción que llevaran a concluir que efectivamente el Servicio “G Suite” es indispensable para hacer modificaciones a una página.

Asimismo, se advierte que la AUTORIDAD RESPONSABLE, no acreditó si la licencia se otorgó de manera general al DOMINIO www.vamosareemplazarles.mx o si, en su caso, se proporcionó de manera individual a cada candidato, incluido el RECURRENTE, ya sea a través de un usuario o por medio de un correo electrónico.

De esta forma, se considera que la AUTORIDAD RESPONSABLE, más que afirmar simplemente que el Servicio “G Suite” es indispensable para hacer modificaciones a una página, debió analizar el caso para allegarse de cuantos elementos fueren necesarios, con la finalidad de estar en aptitud de conocer a fondo la verdad.

En ese sentido, al resultar fundado el agravio hecho valer por el PROMOVENTE, el CONSEJO GENERAL deberá realizar, con los elementos allegados, una valoración técnica de la naturaleza de la licencia “G suite” y una vez realizada, analizar en sus méritos si el servicio que brinda tal herramienta resulta necesario para tener acceso al SITIO WEB; así como también, establezca si se otorgó dicha licencia de manera general al DOMINIO o, en su caso, si se proporcionó de manera individual a cada candidato, incluido el PROMOVENTE, para que a partir de tal consideración, determine si el RECURRENTE debió realizar el reporte por tal concepto.

-Modificaciones al conteo rápido del DOMINIO

Por otra parte, en la resolución impugnada se tiene por acredita la omisión de reportar una aportación partiendo del hecho de que RECURRENTE apareció en el Sitio web, circunstancia por la cual concluye que el mismo recibió una aportación en especie por parte de un ciudadano a los entonces candidatos independientes, concepto que sí fue reportado por los diversos, más no por el ahora RECURRENTE.

No obstante lo anterior, esta SALA REGIONAL considera que tal como lo manifiesta el PROMOVENTE, el CONSEJO GENERAL arribó a tal determinación a partir de la construcción de deducciones y sin contar con elementos de objetivos para ello, como se explica:

El INE determinó que existió una aportación en especie –por cuanto hace al concepto de modificaciones al conteo rápido– por parte del C. Aldo Partida Rodríguez, a catorce de los entonces candidatos independientes, la cual se reportó debidamente dentro de las contabilidades de cada uno de ellos en el SIF, mientras que por lo que hace al Recurrente, no se encontró reporte alguno por dicho concepto, a pesar de que benefició de dicha aportación al aparecer su imagen en el SITIO WEB.

Sin embargo, sustenta su determinación partiendo del hecho de que, si catorce de los diecisiete candidatos realizaron el reporte por dicho concepto, los tres restantes, dentro de los cuales se encuentra el RECURRENTE, incurrieron en omisión, conclusión que se considera incorrecta, en razón de que no existe ningún elemento de convicción con el cual se compruebe fehacientemente que el sujeto obligado utilizó el sistema de modificaciones al conteo rápido del SITIO WEB, ello, con independencia de que su imagen se expusiera en el referido portal, lo anterior, porque de tal circunstancia no es posible desprender que realizó modificaciones por conteo rápido, como lo afirmó la AUTORIDAD RESPONSABLE.

En efecto, si bien el INE sostuvo su conclusión, sobre la base de que los restantes catorce candidatos sí realizaron el reporte correspondiente, se precisa que las personas que lo hicieron, en todo caso, fueron las mismas que recibieron directamente la aportación en especie del DOMINIO, hecho que se desprende de lo manifestado por la empresa “Soluciones y Herramientas en la Nube S. de R. L”, lo cual apunta a que, con independencia del supuesto beneficio considerado en la RESOLUCIÓN IMPUGNADA hacía al RECURRENTE, no podía sustentarse con base en inferencias no demostradas directamente había el sujeto obligado. De ahí lo fundado de los agravios.

Por ello, al resultar fundado el agravio aducido por el RECURRENTE, el CONSEJO GENERAL deberá emitir un nuevo pronunciamiento, respecto del apartado aquí estudiado, en el cual precise, de ser el caso, los elementos probatorios con los cuales se tuvo plenamente acreditada tal omisión, y de no contar con ellos, resuelva lo respectivo atendiendo dicha circunstancia.

Finalmente, es de precisar que en atención a que los anteriores conceptos de agravio resultaron fundados y suficientes para revocar la RESOLUCIÓN IMPUGNADA en la parte mencionada, se torna innecesario abocarse al análisis del agravio restante, dado que ello ningún fin práctico tendría, dado que el mismo podría eventualmente ser modificado.

De ahí que, al resultar fundados los agravios del RECURRENTE lo procedente es revocar parcialmente la RESOLUCIÓN IMPUGNADA, en lo que fue materia de controversia.”

Asimismo, mediante el Considerando TERCERO **título Sentido y efectos**, de la ejecutoria dictada en el recurso de apelación en comento, la Sala Regional determinó lo que a continuación se transcribe:

“Sentido y efectos

*Al resultar fundado el agravio relativo a la falta de motivación se debe **revocar parcialmente la RESOLUCIÓN IMPUGNADA**, en lo que fue materia de impugnación.*

*En este sentido, se ordena a la **AUTORIDAD RESPONSABLE**, que en un plazo de **diez días** naturales contados a partir de la notificación de esta Resolución, emita una nueva resolución de manera **fundada y motivada** en los términos precisados en los Apartados respectivos, y en consecuencia determine lo que en Derecho proceda.*

*Una vez hecho lo anterior, deberá notificar personalmente al **PROMOVENTE** la nueva resolución, dentro de los **tres días** naturales siguientes al de su dictado, a fin de salvaguardar su garantía de audiencia; e informar de ello a esta **SALA REGIONAL** en el mismo plazo.”*

Lo anterior, a efecto de que esta autoridad emita una nueva determinación considerando lo expuesto por la Sala Regional, por lo que este Consejo General procederá a acatar la sentencia, para lo cual, en congruencia con el sentido de la ejecutoria de mérito, se realizarán las siguientes modificaciones a la resolución impugnada:

Por lo anterior, esta autoridad debe emitir una nueva determinación considerando los razonamientos hechos por la Sala Regional.

5. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las condiciones socio económicas del ente infractor.

Bajo esta tesitura, debe considerarse que el partido político sujeto al procedimiento de fiscalización que cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que, en su caso, se les imponga, toda vez que respecto de la capacidad económica de los candidatos independientes, el artículo 223 bis, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades financieras, bancarias y fiscales.

En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra obligados a presentar los candidatos, se advirtió lo siguiente:

ASPIRANTE	CARGO	INGRESOS	PROCENTAJE	CAPACIDAD ECONOMICA
C. Roberto Alejandro Castillo Cruz	Diputado Local	\$167,000.00	5%	\$8,350.00

Ahora bien, toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por los candidatos independientes de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

6. Modificación a la Resolución INE/CG1031/2018.

En cumplimiento con lo mandatado por la Sala Regional, se procede a modificar la resolución **INE/CG1031/2018** en lo tocante a su considerando **3, Apartado F. Ingreso no reportado por conceptos de licencia “g suite” y modificaciones por**

conteo rápido del dominio vamosareemplazarles.mx. y Apartado H, por cuanto hace a la individualización de la sanción del C. Roberto Alejandro Castillo Cruz en los siguientes términos:

3. Estudio de Fondo.

(...)

Apartado F. Ingreso no reportado por conceptos de licencia “g suite” y modificaciones por conteo rápido del dominio [vamosareemplazarles.mx](https://www.vamosareemplazarles.mx).

Así las cosas, derivado de la revocación dictada en la sentencia SCM-RAP-108/2018 del expediente en que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente dividir en dos partes el estudio del apartado de mérito, de la siguiente manera:

Apartado F.1 Ingreso por conceptos de licencia “G Suite” y modificaciones por conteo rápido del dominio vamosareemplazarles.mx, por parte de los C. Alejandra Natzieli Martínez del Toro y Julio Adrián Gorocica Rojas.

Apartado F.2 Ingreso por conceptos de licencia “g suite” y modificaciones por conteo rápido del dominio vamosareemplazarles.mx, por parte del entonces candidato el C. Roberto Alejandro Castillo Cruz.

A continuación se desarrollan los sub-apartados en comento:

Apartado F.1 Ingreso por conceptos de licencia “G Suite” y modificaciones por conteo rápido del dominio vamosareemplazarles.mx, por parte de los C. Alejandra Natzieli Martínez del Toro y Julio Adrián Gorocica Rojas.

Derivado del análisis a la contabilidad en el Sistema Integral de Fiscalización de los entonces candidatos independientes, C. Alejandra Natzieli Martínez del Toro al cargo de Diputada Local por el Distrito 6 en el estado de Nuevo León y Julio Adrián Gorocica Rojas al cargo de Diputado Local por el Distrito 4, en el estado de Yucatán es que se pudo vislumbrar que no cuentan con el reporte por conceptos de Licencia G Suite para el dominio vamosareemplazarles.mx, ahora al entender que la licencia G suite corresponde a un paquete de servicios basados en la nube que un proveedor puede proporcionar a una organización, y que para acceder se necesita un dominio, en este caso el de vamosareemplazarles.mx, se encuentran los sujetos frente a la necesidad de adquirir ese servicio, tal y como se muestra en la contabilidad de los otros catorce sujetos incoados, anteriormente analizados.

(...)

Es así que al acceder a la contabilidad de los C. Alejandra Natzieli Martínez del Toro y Julio Adrián Gorocica Rojas en el Sistema Integral de Fiscalización, no se encontró reporte alguno por concepto de Licencias G Suite por el dominio del sitio web vamosareemplazarles.mx, así como tampoco existe contratación con los mismos, según lo manifestado en el escrito de respuesta de la persona moral proveedora del servicio.

Sin embargo, se tiene certeza que los candidatos denunciados en comento se encontraban en la página de internet, por lo que al no haber realizado una contratación por este concepto pero si haberse beneficiado por el mismo, el cual tiene costo unitario según lo manifestado por la persona moral y los otros candidatos independientes, nos encontramos ante una aportación en especie, misma que no fue reportada en las respectivas contabilidades de los candidatos de mérito en el Sistema Integral de Fiscalización, por lo cual se actualiza la omisión de reportar ingresos dentro del informe de campaña de los dos candidatos independientes en cuestión.

(...)

Misma información que es coincidente con la información que se aprecia en el Sistema Integral de Fiscalización de este Instituto en la contabilidad de los otros catorce candidatos independientes, analizados anteriormente, concluyendo entonces que los otrora candidatos independientes la C. Alejandra Natzieli Martínez del Toro al cargo de Diputada Local por el Distrito 6 en el estado de Nuevo León y el C. Julio Adrián Gorocica Rojas al cargo de Diputado Local por el Distrito 4, en el estado de Yucatán, omitieron reportar ingresos por aportaciones en especie por concepto de Licencia G Suite para el dominio vamosareemplazarles.mx.

(...)

Mientras que por parte de la C. Alejandra Natzieli Martínez del Toro y Julio Adrián Gorocica Rojas, no se encontró reporte alguno dentro del Sistema Integral de Fiscalización; sin embargo, al aparecer estos últimos en el sitio web en comento, se benefician de dicha aportación por parte del C. Aldo Partida Rodríguez junto con los otros catorce candidatos independientes, y derivado de que la misma no fue registrada en las contabilidades de los sujetos obligados de mérito, nos encontramos ante un ingreso no reportado por una aportación en especie por

concepto de modificaciones del conteo rápido en la página web vamosareemplazarles.mx (...)

Es así que los entonces candidatos independientes analizados en el presente, omitieron reportar ingresos por concepto de Licencias G Suite y modificaciones en el conteo rápido, resultando el no reporte con los montos involucrados siguientes:

Candidato independiente	Suma para determinación	Monto involucrado (E)
C. Alejandra Natzieli Martínez del Toro	(B)+(C)+(D)=(E)	\$1,870.48
C. Julio Adrián Gorocica Rojas	(A)+(B)+(C)+(D)=(E)	\$3,097.01

Visto lo anterior, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por los entes involucrados, se tiene lo siguiente:

- Que los dos candidatos independientes, la C. Alejandra Natzieli Martínez del Toro y Julio Adrián Gorocica Rojas recibieron una aportación es especie por conceptos de Licencias de la G Suite para el dominio vamosareemplazarles.mx y las modificaciones realizadas por el conteo rápido.

(...)

- Que el monto involucrado por cuanto hace al ingreso no reportado de la C. Alejandra Natzieli Martínez del Toro es de \$1,870.48 (mil ochocientos setenta pesos 48/100 M.N.) por concepto de Licencia G Suite de los meses de mayo y junio y las modificaciones por conteo rápido a la página www.vamosareemplazarles.mx.
- Que el monto involucrado por cuanto hace al ingreso no reportado del C. Julio Adrián Gorocica Rojas es de \$3,097.01 (tres mil noventa y siete pesos 01/100 M.N) por concepto de Licencia G Suite de los meses los meses de abril, mayo y junio y las modificaciones por conteo rápido a la página www.vamosareemplazarles.mx.

Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el sub-apartado de mérito, esta autoridad electoral cuenta con elementos de convicción que le permiten tener certeza de que la C. Alejandra Natzieli Martínez del Toro entonces Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 6 en el estado de Nuevo León y Julio Adrián Gorocica Rojas, entonces Candidato Independiente

al cargo de Diputado Local por el Distrito 4, en el estado de Yucatán, no reportaron en el Sistema Integral de Fiscalización los conceptos de ingresos por Licencias de la G Suite del dominio vamosareemplazarles.mx y las modificaciones por conteo rápido aportadas por el C. Aldo Partida Rodríguez; por lo que derivado de la información obtenida dentro de la línea de investigación seguida por esta autoridad, anteriormente descrita y analizada, los sujetos incoados vulneraron lo establecido en los artículos 431, numerales 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización; por lo que se declara fundado el sub-apartado objeto de estudio.

De lo anterior esta autoridad colige que los entonces candidatos independientes sujetos de este apartado, no reportaron ingresos por concepto de Licencia de la G Suite para el dominio vamosareemplazarles.mx, y las modificaciones por conteo rápido, por lo que son acreedores a una sanción, así pues se procederá a la individualización de la misma.

(...)

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

(...)

b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron

Los candidatos independientes infractores omitieron reportar el ingreso recibido, de ahí que este contravino lo dispuesto en los artículos 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refiere la irregularidad observada:

Candidato	Conducta
C. Alejandra Natzieli Martínez del Toro.	El sujeto obligado omitió reportar ingresos por aportaciones en especie por concepto de Licencia de la G Suite y modificaciones por conteo rápido para el dominio vamosareemplazarles.mx del periodo mayo y junio, por un monto de \$1,870.48.
C. Julio Adrián Gorocica Rojas	El sujeto obligado omitió reportar ingresos por aportaciones en especie por concepto de Licencia de la G Suite y modificaciones por conteo rápido para el dominio vamosareemplazarles.mx del periodo de abril, mayo y junio, por un monto de \$3,097.01.

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León y Yucatán, concretándose en dichas entidades federativas respectivamente, detectándose derivado del escrito queja presentado por el C. Fernando Sánchez Díaz, entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 4 en el estado de Jalisco.

(...)

Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el **Apartado H** de la presente Resolución.

(...)

Apartado F.2 Ingreso por conceptos de licencia “G Suite” y modificaciones por conteo rápido del dominio vamosareemplazarles.mx, por parte del entonces candidato el C. Roberto Alejandro Castillo Cruz.

Derivado del Recurso de Apelación interpuesto por el C. Roberto Alejandro Castillo Cruz, al acuerdo INE/CG1031/2018 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la Sala Regional correspondiente a la cuarta circunscripción con sede en la Ciudad de México revocó dicho acuerdo dentro de la sentencia SCM-RAP-108/2018, por lo cual esta autoridad realizó de diversos requerimientos, con el fin de ser más exhaustiva, obteniendo los resultados que a continuación se describen.

Se realizó un requerimiento de información por esta autoridad con fecha del 07 de septiembre de 2018, mediante número de oficio INE-JAL-JLE-VE-2219-2018 signado en la Junta Local Ejecutiva del estado de Jalisco del Instituto Nacional Electoral, al C. Andrés Barrios Arenas representante debidamente acreditado de la empresa Soluciones y Herramientas en la Nube S. de R.L. de C.V.

En respuesta a dicha solicitud, el representante menciona que por lo que hace al concepto correspondiente al conteo rápido del sitio web en comentario, solo y exclusivamente se ven beneficiados los entonces candidatos independientes por diferentes cargos, en el estado de Jalisco, por lo que dicha aportación por parte del C. Aldo Partida Rodríguez solo benefició a los entonces candidatos independientes del estado de Jalisco, y derivado de ello, el entonces candidato el C. Roberto Alejandro Castillo Cruz no se encontraba ante la obligación de registrar en su

contabilidad la aportación en especie por concepto de Conteo Rápido, dado que él contendía por un cargo en la Ciudad de México.

Así también, de dicha respuesta esta autoridad vislumbró que no se necesita la existencia de un pago por concepto de Licencias “G Suite” para poder realizar adaptaciones y modificaciones al sitio web, situación que confirmó con la respuesta que presentó UNICOM donde menciona que para realizar modificaciones a una página web no es necesario hacer previamente un pago por concepto de licencias.

Esto es, que no necesariamente debe existir contratación por licencias, para que existan las contrataciones subsecuentes, en este caso, las contrataciones por adaptaciones si se encuentran reportadas en la contabilidad del entonces candidato en el Sistema Integral de Fiscalización, como fue analizado previamente en el apartado D, por lo que se tiene certeza de la existencia de contrataciones entre el entonces candidato de mérito y la persona moral Soluciones y Herramientas en la Nube, S. de R.L.; sin embargo, esto no exige un pago por el concepto objeto de estudio del presente sub-apartado.

Es así, que el entonces candidato independiente analizado en el presente sub-apartado, no omitió reportar ingresos por concepto de Licencias G Suite y modificaciones en el conteo rápido, dado que no existió dicha obligación ya que no recibió ningún ingreso al respecto.

Visto lo anterior, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la sustanciación del acatamiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por los entes involucrados, se tiene lo siguiente:

- Que esta autoridad fiscalizadora no tiene elementos suficientes que generen prueba plena, de la relación de coexistencia entre las Licencias de la G Suite y los servicios subsecuentes dentro de la página www.vamosareemplazarles.mx .
- Que las modificaciones por conteo rápido en la página www.vamosareemplazarles.mx únicamente beneficiaron a los entonces candidatos pertenecientes al estado de Jalisco, por lo cual el C. Roberto Alejandro Castillo Cruz, no recibió ningún beneficio con relación a dicho concepto.

- Que el entonces candidato independiente el C. Roberto Alejandro Castillo Cruz, no recibió ningún tipo de aportación por conceptos de Licencias “G Suite” para el dominio vamosareemplazarles.mx o por las modificaciones realizadas por el conteo rápido.
- Que al no existir ningún tipo de beneficio por los conceptos antes mencionados, al C. Roberto Alejandro Castillo Cruz, no tenía obligación de reportarlos dentro de su contabilidad en el Sistema Integral de Fiscalización.

Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el sub-apartado de mérito, esta autoridad electoral cuenta con elementos de convicción que le permiten tener certeza de que el C. Roberto Alejandro Castillo Cruz entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 26 de la Ciudad de México; no tenía la obligación de reportar de conceptos de ingresos por Licencias de la G Suite del dominio vamosareemplazarles.mx y las modificaciones por conteo rápido aportadas; por lo que derivado de la información obtenida dentro de la línea de investigación seguida por esta autoridad, anteriormente descrita y analizada, el sujeto incoado no vulneró lo establecido en los artículos 431, numerales 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización; por lo que se declara **infundado** el sub-apartado objeto de estudio.

(...)

APARTADO H. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, se procede a imponer la sanción por las faltas analizadas en los apartados **F** y **G** de la presente Resolución, atendiendo a su vez, al cumulo de análisis y argumentos a lo largo de la presente, entre ellos la capacidad económica de cada uno de los candidatos independientes acreedores a una sanción, misma que consta en el considerando 2, y a la determinación del costo por de cada una de las faltas.

(...)

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, deberá ser acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye.

Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

(...)

C. Roberto Alejandro Castillo Cruz

➤ Beneficio indebido a Candidatos independientes por otro Candidato independiente.

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el Candidato Independiente, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.

- Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en el beneficio indebido a otros sujetos obligados por **concepto de adaptaciones** del dominio de la página web www.vamosareemplazarle.mx, durante la campaña en el Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, en el escrito de emplazamiento, derivado de la admisión de la queja que dio origen al presente procedimiento.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$1,015.00 (mil quince pesos 00/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las circunstancias en que fueron cometidas, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales¹⁹.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar

que el participante de la comisión, en este caso el candidato independiente se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquella que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso.

Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que rodean la irregularidad, la cual ha quedado plasmada en los párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se evite y fomente el tipo de conducta ilegal o similar cometida.

Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de la conducta, la imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos precedentes.

Al respecto, en la Resolución identificada como SUP-RAP-432/2016, que aquí se acata, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que:

“(...) tratándose de candidatos independientes, la valoración de los parámetros previstos en el artículo 458, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales a fin de individualizar una sanción por falta cometida por los candidatos independientes, debe ser más flexible, de forma proporcional y razonable a esa calidad, máxime si se toma en cuenta que tratándose de las multas que se les imponen, los recursos económicos para sufragarlas emanan de su patrimonio personal, a diferencia de lo que acontece con los partidos políticos, los cuales solventan dichas sanciones con el propio financiamiento público que reciben.”

Considerando lo anterior, el monto a imponer sería el siguiente:

Tipo de conducta	Monto Involucrado	Porcentaje de sanción	Monto de la sanción
Beneficio indebido a Candidatos independientes por otro Candidato independiente.	\$1,015.00	100%	\$1,015.00
TOTAL			\$1,015.00

Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos antes señalados para determinar la capacidad económica del candidato independiente, este Consejo General concluye que la sanción a imponer al **C. Roberto Alejandro Castillo Cruz**, por lo que hace a las conducta observada es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso d), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a **12** (doce) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de **\$967.20 (novecientos sesenta y siete pesos 20/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

(...)

RESUELVE

(...)

CUARTO. Se declara **fundado** el presente procedimiento administrativo sancionador por cuanto hace a Alejandra Natzieli Martínez del Toro entonces Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 6 en el estado de Nuevo León y Julio Adrián Gorocica Rojas, entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 4, en el estado de Yucatán, en los términos del **Apartado F** del **considerando 3** de la presente Resolución.

QUINTO. Se declara **infundado** el presente procedimiento administrativo sancionador por cuanto hace al entonces candidato independiente el C. Roberto Alejandro Castillo Cruz entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 26 de la Ciudad de México, en los términos del **Apartado F.1** del **considerando 3** de la presente Resolución

SEXTO. Se declara **fundado** el presente procedimiento administrativo sancionador por cuanto hace a los entonces candidatos independientes C.C. José Pedro Kumamoto Aguilar, Candidato Independiente al Senado de la República por el estado de Jalisco, C. Paola Flores Trujillo Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 13, c. Oswaldo Ramos López, Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 19, C. José De Jesús Martínez Esparza Candidato Independiente al cargo de diputado local por el Distrito 4, C. Alejandra Vargas Ochoa Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 6, C. Susana Gabriela Velasco González Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 5, C. Luis Ángel Morales Hernández Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 7, C. Susana de la Rosa Hernández Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 8, C. Susana Ochoa Chavira candidata independiente al cargo de diputada local por el Distrito 10, C. José Bernardo Masini Aguilera Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 14, C. Pablo Ricardo Montaña Bekmann Candidato Independiente al cargo de Diputado Federal por el Distrito 8, C. Rodrigo Cerda Cornejo Candidato Independiente al cargo de Diputado Federal por el Distrito 10, C. Alberto Valencia Bañuelos Candidato Independiente al cargo de Diputado Federal por el Distrito 13 todos del estado de Jalisco; así como el C. Roberto Alejandro Castillo Cruz Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 26 de la Ciudad de México, C. Alejandra Natzieli Martínez del Toro Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 6 en el estado de Nuevo León; C. Julio Adrián Gorocica Rojas Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 4, en el estado de Yucatán y C. Juana Adelfa Delgado Quintana candidata independiente al Senado de la República por Jalisco, en los términos del **Apartado G** del **considerando 3** de la presente Resolución.

SEPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando **3**, **Apartado H** de la presente Resolución, se imponen las sanciones siguientes

(...)

- Al C. Roberto Alejandro Castillo Cruz, en su carácter de candidato independiente, por el beneficio indebido entre candidatos.

Una multa equivalente a **12** (doce) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de **\$967.20** (novecientos sesenta y siete pesos 20/100 M.N.).

OCTAVO. Se da seguimiento a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros en los términos del **considerando 4** de la presente Resolución.

NOVENO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, notifique la presente Resolución al Instituto Estatal Electoral de Jalisco, Ciudad de México, Nuevo León y Yucatán y dichos organismos, a su vez, estén en posibilidad de notificar a los sujeto interesados a la brevedad posible; por lo que se solicita a los Organismos Públicos Locales remitan a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado

DÉCIMO. Se instruye a la Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, que en términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de la totalidad de las sanciones económicas impuestas en esta Resolución, sean destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables.

DÉCIMO PRIMERO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de las sanciones impuestas en la presente Resolución, en términos de lo dispuesto en el Artículo Transitorio PRIMERO del Acuerdo **INE/CG61/2017**.

DÉCIMO SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual

según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

DÉCIMO TERCERO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento de los Tribunales Electorales Estatales y a la Sala correspondiente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente Resolución, remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético.

DÉCIMO CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

(...)

7. Que la sanción originalmente impuesta al **C. Roberto Alejandro Castillo Cruz** en el **Apartado H** del considerando **3** de la Resolución **INE/CG1031/2018** resolutivo **SEXTO**, tuvo las modificaciones que se reflejan de la siguiente manera:

Resolución INE/CG1031/2018		Acuerdo por el que se da cumplimiento al SCM-RAP-108/2018	
Apartado H C. Roberto Alejandro Castillo Cruz	Sanción	Apartado H C. Roberto Alejandro Castillo Cruz	Sanción
Al C. Roberto Alejandro Castillo Cruz, en su carácter de candidato independiente, por el ingreso no reportado y por el beneficio indebido entre candidatos	Una multa equivalente a 45 (cuarenta y cinco) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de \$3,627.00 (tres mil seiscientos veintisiete pesos 00/100 M.N.).	Al C. Roberto Alejandro Castillo Cruz, en su carácter de candidato independiente, por el beneficio indebido entre candidatos.	Una multa equivalente a 12 (doce) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de \$967.20 (novecientos sesenta y siete pesos 20/100 M.N.).

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

A C U E R D A

PRIMERO. Se modifica la parte conducente de la Resolución **INE/CG1031/2018**, aprobada en sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/113/2018, en los términos precisados en los Considerandos **6** y **7** del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que por su conducto, se remita la presente Resolución, a la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al Instituto Electoral de la Ciudad de México y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de notificar al C. Roberto Alejandro Castillo Cruz a la brevedad posible; por lo que se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado.

TERCERO. Infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de México, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SCM-RAP-108/2018** dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo.

CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación hacer del conocimiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México el presente Acuerdo, a efecto de que la multa determinada en el presente Acuerdo sea aplicada por dicho Organismo Público Local, a partir del mes siguiente a aquél en el que el presente Acuerdo haya causado estado. En términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de la sanción económica impuesta en este acuerdo serán destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables.

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1277/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO SCM-RAP-106/2018

A N T E C E D E N T E S

I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. El seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado y la Resolución, identificados con los números **INE/CG1134/2018** e **INE/CG1135/2018**, que presentó la Comisión de Fiscalización del propio Instituto, sobre la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos a diversos cargos, correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 en el estado de Morelos.

II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el quince de agosto de dos mil dieciocho, el Partido MORENA, presentó recurso de apelación para controvertir la parte conducente de la Resolución **INE/CG1135/2018**, el cual fue recibido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para posteriormente mediante Acuerdo de veintitrés de agosto turnarse a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la cuarta circunscripción plurinominal, con sede en la Ciudad de México¹ para su conocimiento a lo relativo a las impugnaciones a las conclusiones derivadas de la revisión de gastos relacionadas con las diputaciones locales y ayuntamientos.

En cumplimiento a lo anterior, la Sala Ciudad de México integró el expediente **SCM-RAP-106/2018** y lo turnó a la ponencia a cargo del Magistrado Héctor Romero Bolaños.

¹ En adelante, Sala Ciudad de México

III. Sentencia Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Ciudad de México resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el seis de septiembre de dos mil dieciocho, determinando en el Punto Resolutivo **ÚNICO**, lo que a continuación se transcribe:

*“**ÚNICO.** Se **revoca parcialmente** la resolución impugnada, para los efectos precisados en el Considerando Cuarto de la sentencia.*

IV. Toda vez que en la ejecutoria recaída al recurso de apelación se ordenó a este Consejo General emitir una nueva resolución debidamente fundada y motivada, respecto de la imposición de la sanción que debe imponerse al partido recurrente; con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables, en consecuencia la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de mérito.

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44, numeral 1, incisos j); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos.

2. Que el seis de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Ciudad de México resolvió revocar parcialmente la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificada con la clave INE/CG1135/2018, en lo que fue materia de impugnación materia de impugnación (conclusión 8_C7_P1) respecto del Partido Morena en el estado de Morelos, por lo que se procede a modificar la Resolución de mérito, observando a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria.

3. Que en la sección relativa al estudio de fondo, dentro del Considerando TERCERO, numeral 3, inciso B, el órgano jurisdiccional señaló que:

“(…)

TERCERO. Estudio de fondo

(…)

3. Síntesis de agravios y respuesta.

(…)

B. Conclusión 8_C7_P1.

1. Agravios.

Acusa el Actor la falta de fundamentación y motivación que a su decir repercute en la indebida individualización de la sanción.

Que se vulneran diversos artículos constitucionales, de la Ley Electoral y de la Ley de Partidos con relación a los principios de legalidad, certeza y proporcionalidad en las multas que pretende imponer el Consejo General por un monto \$390,713.25 (trescientos noventa mil setecientos trece pesos 25/100).

Multa que acusa de ilegal puesto que por Acuerdo del treinta y uno de julio la Comisión de Fiscalización del INE aprobó modificar las multas a los partidos y candidatos que cometieron irregularidades en los gastos de campaña, entre otros, lo fue la reducción del ciento cincuenta por ciento del monto involucrado en los gastos no reportados; disminuir de cien a cincuenta por ciento los gastos no comprobados, de diez a una UMA por evento el registro extemporáneo, mientras que la sanción en errores en materia de prorrateo se reduciría del treinta al cinco por ciento del monto involucrado.

Circunstancia que no fue respetada por la Responsable porque el concepto en la conclusión fue “El sujeto obligado omitió registrar el ingreso en su contabilidad por un monto de \$260,475.50”; y que al haberse sancionado por la cantidad arriba indicada, ello representa el ciento cincuenta por ciento del monto involucrado, sin señalar por qué fijó tales montos de la sanción.

2. Respuesta.

Es importante precisar que el Actor no controvierte la acreditación de la conducta -por el contrario, la reconoce- sino que sus motivos de disenso los endereza solo por cuanto a la individualización de la sanción y respecto de

tomar el ciento cincuenta por ciento del total del monto involucrado para su imposición.

El agravio es fundado, según se explica a continuación. El principio de congruencia se encuentra tutelado en el artículo 17 de la Constitución, el cual prevé que toda decisión de los órganos encargados de impartir justicia debe tener una relación lógica entre las consideraciones que contenga la sentencia, es decir, que no sean contradictorias entre sí o con los Puntos Resolutivos -congruencia interna-, así como con lo planteado por las partes, sin omitir o introducir cuestiones ajenas a la litis planteada -congruencia externa-.

*Sirve de apoyo a lo anterior Jurisprudencia 28/2009, sustentada por la Sala Superior de este Tribunal Electoral de rubro: **‘CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIAS.’***

Criterio que, si bien se refiere a las sentencias, también resulta aplicable a las resoluciones que emitan las autoridades administrativas.

En el caso, en el Dictamen se sostuvo:

En la Resolución impugnada después de que se calificó la falta como grave ordinaria, se señalaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en la materia, la Responsable señaló que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria ascendía a \$260,475.50 (doscientos sesenta mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 50/100 M.N.).

Al decidir que la sanción a imponer debía ser de índole económica, determinó hacerlo por el ciento cincuenta por ciento del monto involucrado, esto es, por un monto \$390,713.25 (trescientos noventa mil setecientos trece pesos 25/100).

Por consecuencia, el Consejo General concluyó imponer al Partido la sanción prevista en la fracción III inciso a) numeral 1 del artículo 456 de la Ley Electoral consistente en una reducción del cincuenta por ciento por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad que se ha referido en el párrafo anterior.

Sin embargo, en la propia Resolución impugnada –antecedente XXXVII- se sostuvo lo siguiente:

‘XXXVII. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado en la Décima novena sesión extraordinaria de fecha treinta de julio de dos mil dieciocho, por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del

Instituto Nacional Electoral, por mayoría de cuatro votos a favor de la Consejera Electoral Dra. Adriana Favela Herrera y los Consejeros Electorales Dr. Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero Presidente de la Comisión el Dr. Ciro Murayama Rendón y con un voto en contra de la Consejera Electoral Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles.

En cumplimiento a lo ordenado por la Comisión de Fiscalización, se modifican los criterios de sanción propuestos por la Unidad Técnica de Fiscalización para quedar como sigue:

- a. El egreso no reportado se sanciona con el 100% del monto involucrado en cada conducta.*
- b. El egreso no comprobado que vulnera únicamente el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, se sanciona con el 50% del monto involucrado en cada conducta.*
- c. El evento registrado de manera extemporánea, pero antes de su celebración se sanciona con 1 UMA.*
- d. El evento registrado de manera extemporánea y después de su celebración se sanciona con 5 UMA.*
- e. Las sanciones impuestas deberán ejecutarse de manera tal que la retención máxima de la ministración mensual de financiamiento ordinario no exceda el 25% (veinticinco por ciento) de la ministración que reciban los sujetos obligados.*

Por ello, en cualquier parte de la resolución en la que, por las conductas señaladas en los incisos del a) al d), se mencione un monto diferente, deberá prevalecer este último. Es decir, las cantidades correspondientes a los porcentajes que han quedado precisados en los incisos referidos.

Para efectos de lo anterior, se fijarán las sanciones a ejecutar en el mes correspondiente considerando en todo momento que, de existir un conjunto de sanciones firmes pendientes de cobro por un importe superior al porcentaje antes señalado, éstas deberán ser cobradas conforme al orden que quedaron firmes, en el entendido que no podrá descontarse un importe menor al equivalente del citado porcentaje.'

Transcripción de la que se obtiene que, tal como lo argumenta el Actor, la Comisión de Fiscalización del INE determinó la reducción de los montos para la imposición de las sanciones, lo que al caso atañe en los casos de omisión de reportar gastos, del ciento cincuenta al cien por ciento del monto involucrado.

En este punto, importa precisar que si bien tanto la Sala Superior⁷ como esta Sala Regional⁸ se han pronunciado en el sentido de que "ES VÁLIDO (para el Consejo General) AMPLIAR LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES (propuestas por la Comisión de Fiscalización del INE) CON RESPECTO AL MONTO INVOLUCRADO", se estima que tal criterio no resulta aplicable en la especie, cuenta habida que en el presente caso fue el propio Consejo responsable el que previo a la aprobación de la Resolución impugnada se

pronunció en el sentido de que las multas a imponer equivaldrían al cien por ciento (100%) del monto involucrado, conforme a lo aprobado por la mencionada Comisión.

En efecto, del análisis de la versión estenográfica de la sesión del Consejo General en la que se emitió la Resolución impugnada esta Sala Regional advierte que durante la discusión y aprobación del punto dos de la orden del día de dicha sesión el Consejo responsable aprobó por mayoría de ocho votos a favor el criterio relativo a la disminución del monto de las multas tal como se desprende de la siguiente transcripción:

‘AHORA, SOMETO A SU CONSIDERACIÓN LOS CRITERIOS CON LOS CUALES SE HICIERON LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y LAS CONSECUENCIAS, OBVIAMENTE DE LOS MISMOS.

QUIENES ESTÉN A FAVOR DE APROBARLO EN LOS TÉRMINOS EN QUE ESTÁN EN LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN, SÍRVANSE MANIFESTARLO, SI SON TAN AMABLES. COMO VIENEN LOS PROYECTOS CON LOS CRITERIOS.

8 VOTOS.

¿EN CONTRA?

3 VOTOS.

APROBADOS POR 8 VOTOS A FAVOR Y 3 VOTOS EN CONTRA.’

Conforme a lo antes trasunto, es evidente para esta Sala Regional que, con independencia de lo aprobado por la Comisión de Fiscalización, el Consejo responsable aprobó los criterios respecto del monto de las sanciones a imponer, de ahí que los mismos le resultaban vinculantes.

Luego, si la Responsable no tomó en cuenta la reducción aprobada para efectos de imponerle la sanción respectiva porque lo hizo sobre la base de un ciento cincuenta por ciento del monto involucrado, es indudable que incurrió en una falta de congruencia. De ahí lo fundado del agravio.

No obsta a lo anterior, el hecho que en la misma resolución se hubiere indicado que para el caso de que se mencionara un monto diferente debería prevalecer tal criterio, puesto que ello no genera certeza para Morena por cuanto al monto que

corresponde a la sanción, así como los efectos de la misma respecto de su financiamiento público.

Tampoco se explica en la Resolución impugnada cuáles serían los mecanismos o metodología para que el Partido pudiera hacer valer o reclamar los ajustes a las cantidades autorizadas, lo que también genera incertidumbre respecto a lo que habrá de descontarse –o incluso disponer- de su financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias.

Por tanto, a juicio de esta Sala Regional, y con la finalidad de otorgar certeza al Partido respecto del monto involucrado en la imposición de la sanción en comento, procede revocar en cuanto a la conclusión en análisis, la Resolución impugnada.

(...)”

4. Que de la lectura del SCM-RAP-106/2018, se desprende que en relación con la conclusión 8_C7_P1 la Sala Regional Ciudad de México determinó que lo procedente es revocar a efecto que se emita una nueva resolución debidamente fundada y motivada, además de ser coherente con lo decidido por la Comisión de Fiscalización por cuanto a la reducción de los montos a considerar para la imposición de la sanción respectiva.

5. Para dar cumplimiento a la determinación de la Sala Superior en el SCM-RAP-106/2018, esta autoridad electoral procedió a acatar en los términos ordenados en la referida sentencia, de acuerdo a lo siguiente:

Sentencia	Efectos	Acatamiento
Revoca parcialmente la resolución INE/CG1135/2018 emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.	Respecto a la conclusión 8_C7_P1, se revoca la resolución impugnada para efecto de que emita una nueva resolución debidamente fundada y motivada, además de ser coherente con lo decidido por la Comisión de Fiscalización.	a) Toda vez que la conducta contenida en la conclusión 8_C7_P1 del Dictamen INE/CG1134/2018 (mismo que no fue impugnado, y por tanto se encuentra firme) es un <u>INGRESO NO REPORTADO</u> ; en coherencia con el criterio aprobado por la Comisión de Fiscalización y posteriormente confirmado por este Consejo General, se impone a dicha conducta infractora un 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado.

Sentencia	Efectos	Acatamiento
		b) La retención del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual del financiamiento ordenada en la resolución INE/CG1135/2018, que solo se encontraba en el cuerpo del considerando 34.8, inciso f), conclusión 8_C7_P1 , se reduce , para quedar en 25% (veinticinco por ciento) conforme a los criterios aprobados por la Comisión de Fiscalización y confirmado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

6. En tanto la Sala Regional Ciudad de México determinó revocar la Resolución impugnada INE/CG1135/2018, en lo tocante a la conclusión 8_C7_P1, para que esta autoridad emita una nueva resolución debidamente fundada y motivada que sea coherente con lo decidido por la Comisión de Fiscalización, este Consejo General procede a su modificación.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE CAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE DIPUTADO LOCAL Y AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, EN EL ESTADO DE MORELOS (PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES)

(...)

34.8 Partido Político MORENA

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del Informe de la precampaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado son las siguientes:

(...)

f) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 8_C7_P1

A continuación, se desarrollan los apartados en comento:

(...)

f) En acatamiento al SCM-RAP-106/2018, con el fin de cumplir con la sentencia de mérito, y que la resolución se encuentre debidamente fundada y motivada, además de ser coherente con lo decidido por la Comisión de Fiscalización, se hacen las siguientes manifestaciones:

En sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización, celebrada el treinta de julio de dos mil dieciocho y concluida el treinta y uno del mismo mes y año, la citada Comisión, determinó modificar, únicamente respecto de cuatro conductas, los criterios de sanción propuestos por la Unidad Técnica de Fiscalización, a saber:

- **EGRESO NO REPORTADO**
- **EGRESO NO COMPROBADO**
- **EVENTOS REGISTRADOS DE MANERA EXTEMPORÁNEA, PREVIO A SU REALIZACIÓN**
- **EVENTOS REGISTRADOS DE MANERA EXTEMPORÁNEA, POSTERIOR A SU REALIZACIÓN**

Al efecto, los criterios de sanción aprobados por la Comisión de Fiscalización quedaron establecidos de la siguiente manera:

- a. El **egreso no reportado** se sanciona con el 100% del monto involucrado en cada conducta.
- b. El **egreso no comprobado** que vulnera únicamente el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, se sanciona con el 50% del monto involucrado en cada conducta.
- c. El evento registrado de manera extemporánea, pero antes de su celebración se sanciona con 1 UMA.

d. El evento registrado de manera extemporánea y después de su celebración se sanciona con 5 UMA.

Asimismo, se ordenó disminuir la retención de la ministración mensual del financiamiento pasando del 50% (cincuenta por ciento) propuesto por la Unidad Técnica de Fiscalización, al 25% (veinticinco por ciento) aprobado por la Comisión de Fiscalización.

Dentro de los criterios de sanción propuestos por la Unidad Técnica de Fiscalización y aprobados por la Comisión de Fiscalización sin que existiera modificación, se encuentra el **INGRESO NO REPORTADO**, el cual se sanciona con un 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado. Dicho criterio también fue aceptado por los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral al aprobar las diversas resoluciones relacionadas con el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018.

Ahora bien, de conformidad con el Dictamen INE/CG1134/2018, mismo que se encuentra firme por no haber sido impugnado, la conclusión 8_C7_P1, contiene el siguiente texto:

“8_C7_P1

*El sujeto obligado **omitió registrar el ingreso** en su contabilidad por un monto de \$260,475.50”*

[el subrayado y negritas no son parte del texto original]

Es pertinente señalar que a foja 32 de la sentencia recaída al del recurso de apelación SCM-RAP-106/2018, la Sala Ciudad de México confirma que el recurrente impugna la conclusión antes transcrita. Con el fin de tener claridad con lo señalado, se transcribe la parte conducente:

“(…) porque el concepto en la conclusión fue ‘El sujeto obligado omitió registrar el ingreso en su contabilidad por un monto de \$260,475.50’,”

Visto lo anterior, tomando en consideración que la **conclusión 8_C7_P1**, conforme al Dictamen Consolidado INE/CG1134/2018, es un **INGRESO NO REPORTADO**, este Consejo General procede a dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala Ciudad de México, considerando como base para sancionar al partido recurrente, los criterios aprobados por la Comisión de Fiscalización y posteriormente confirmados por este Consejo.

En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria, infractora de los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización:

No.	Conclusión	Monto involucrado
8_C7_P1	<i>“El sujeto obligado omitió registrar el ingreso en su contabilidad por un monto de \$260,475.50”.</i>	\$260,475.50

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al observarse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de mérito, se hizo del conocimiento del sujeto obligado, a través del oficio de errores y omisiones, referido en el análisis de las conclusiones, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, contados a partir del momento de la notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar la observación realizada.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los candidatos involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña materia de estudio, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6, del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de sus candidatos las observaciones que se detallan en el oficio referido en el análisis de las conclusiones. Esto, a efecto que los candidatos presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido político, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de

salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de la conducta materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el capítulo III *“DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS”* de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior.”*

De lo anterior se desprende que no obstante que el ente político haya omitido reportar los ingresos recibidos, no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; derivado del nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o coaliciones en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y egresos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea al partido político y/o candidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su

caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.²

En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de informes de campaña, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, si la obligación original de reportar los ingresos recibidos está a cargo de los partidos políticos en términos de los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta obligado.

Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

² Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.

En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de

presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación³:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.-

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes

³ Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.”

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del sujeto obligado no fue idónea para atender la observación realizada, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito al ente político, pues no se presentaron acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que violenta los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión)
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del ente político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el **considerando VEINTIUNO** de la resolución INE/CG1135/2018.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

En relación con la irregularidad identificada en la conclusión antes referida del Dictamen Consolidado, se identificó que el ente político omitió reportar el ingreso recibido, en beneficio de su campaña.

Por consiguiente, en el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado, consistente en haber incumplido con su obligación de reportar el ingreso recibido, atentando contra lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado omitió reportar el ingreso recibido. De ahí que este contravino lo dispuesto por los 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refiere la irregularidad observada:

“El sujeto obligado omitió registrar el ingreso en su contabilidad por un monto de \$260,475.50”.

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Morelos, concretándose en dicha entidad federativa, detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados por la legislación en materia electoral, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir registrar contablemente la totalidad de los ingresos obtenidos, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos.

Así las cosas, una falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes

establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la certeza y la transparencia en el origen de los recursos.

En la conclusión de mérito, se vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.⁴

En términos de lo establecido en los preceptos antes señalados, los sujetos obligados tienen el deber de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales reporten el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación. En el caso concreto, tienen la obligación de presentar el Informe de Campaña de los ingresos y egresos, en el que será reportado, entre otras cosas, los ingresos totales y gastos ordinarios que el ente político hayan realizado durante la campaña objeto del informe.

El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el adecuado manejo de los recursos que los partidos políticos, reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como una equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un Estado democrático.

Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se establece la obligación a los sujetos obligados de presentar toda aquella documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista transparencia de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a los entes políticos en una situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad.

La finalidad de la norma en comento, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas y de control,

⁴ “Artículo 79. 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes: (...) b) Informes de Campaña: I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; (...)” y “Artículo 96. 1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento. (...)”

mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que ésta cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la obligación de rendición de cuentas en el manejo de los recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esa disposición subyace ese único valor común.

Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los institutos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Por tanto, se trata de una norma que protege un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Por su parte, el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización impone a los sujetos obligados dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que

reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y 2) Sustentar esos registros con el respaldo de los documentos en original.

La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la documentación comprobatoria, así como necesaria relativa a los ingresos de los partidos políticos a fin de que pueda verificar con certeza que cumplan en forma transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el ente político vulneró las hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En este sentido, en el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado se traduce en infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto del ente político.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una misma conducta y por tanto, en una misma falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que al ente político no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta cometida.

Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el sujeto obligado se califica como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el Considerando VEINTIUNO de la Resolución INE/CG1135/2018, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar la conducta como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

Conclusión 8 C7 P1

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el ente político, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que **no reportó el ingreso recibido**, contraviniendo expresamente lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al ente político, se actualizó al omitir reportar los ingresos recibidos, contrario a lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral; aunado a ello, que la comisión de la falta derivó de la revisión al Informe de Campaña, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Morelos.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el ente político conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo revisión de Informes de Gastos de Campaña.
- Que el ente político no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$260,475.50 (doscientos sesenta mil pesos cuatrocientos setenta y cinco pesos 50/100 M.N.)**.
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁵

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracciones I y II del ordenamiento en cita, no son aptas para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor, una amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente (ahora Unidades de Medida y Actualización), serían poco idóneas para disuadir las conductas infractoras como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al ente político es de índole económica equivalente al **150%** (ciento cincuenta por ciento) **derivado de un ingreso no reportado**, cantidad que asciende a un total de **\$390,713.25 (Trescientos noventa mil setecientos trece pesos 25/100 M.N.)**

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al partido político Morena es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25%** (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$390,713.25 (trescientos noventa mil setecientos trece pesos 25/100 M.N.)**.

⁵ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

7. Las sanciones impuestas a MORENA en el estado de Morelos de conformidad con la Resolución **INE/CG1135/2018**, particularmente por lo que toca a la conclusión 8_C7_P1 sufrieron la siguiente modificación.

Sanciones en resolución INE/CG1135/2018	Modificación	Sanciones en Acatamiento a SCM-RAP-106/2018
<p>OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 34.8 de la presente Resolución, se imponen al Partido Político MORENA las sanciones siguientes:</p> <p>(...)</p> <p>f) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 8_C7_P1</p> <p><u>Conclusión 8_C7_P1</u></p> <p>Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$390,713.25 (trescientos noventa mil setecientos trece pesos 25/100 M.N.).</p>	<p>Se modifica la retención máxima de la ministración mensual de financiamiento ordinario pasando del 50% (cincuenta por ciento), monto que se sólo se encontraba en el cuerpo del inciso f), considerando 34.8, conclusión 8_C7_P1, para quedar en 25% (veinticinco por ciento).</p>	<p>OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 34.8 de la presente Resolución, se imponen al Partido Político MORENA las sanciones siguientes:</p> <p>(...)</p> <p>f) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 8_C7_P1</p> <p><u>Conclusión 8_C7_P1</u></p> <p>Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$390,713.25 (trescientos noventa mil setecientos trece pesos 25/100 M.N.).</p>

8. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en los Considerandos **5, 6 y 7** del Acuerdo de mérito, se impone a MORENA **en el estado de Morelos**, las sanciones consistentes en:

OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 34.8 de la presente Resolución, se imponen al Partido Político MORENA las sanciones siguientes:

(...)

f) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: **Conclusión 8_C7_P1**

Conclusión 8_C7_P1

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$390,713.25 (trescientos noventa mil setecientos trece pesos 25/100 M.N.)**.

En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

A C U E R D A

PRIMERO. Se modifica la parte conducente de la Resolución **INE/CG1135/2018**, aprobada en sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, en los términos precisados en los Considerandos **5 a 8** del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción Electoral Plurinominal con sede en la Ciudad de México, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SCM-RAP-106/2018**, remitiéndole para ello las constancias atinentes.

TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales haga del conocimiento del Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana el presente Acuerdo, a efecto de que se proceda al cobro de las sanciones impuestas, en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme, de conformidad con lo establecido en los considerandos seis y ocho del presente Acuerdo con relación a la Resolución **INE/CG1135/2018**.

CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1278/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO SUP-RAP-275/2018

A N T E C E D E N T E S

I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. El seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado y la resolución, identificados con los números **INE/CG1134/2018** e **INE/CG1135/2018**, que presentó la Comisión de Fiscalización del propio Instituto, sobre la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos a diversos cargos, correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 en el estado de Morelos.

II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el diez de agosto de dos mil dieciocho, el Partido Revolucionario Institucional, presentó recurso de apelación para controvertir la parte conducente al Dictamen Consolidado y la Resolución, identificados con los números **INE/CG1134/2018** e **INE/CG1135/2018**, el cual fue recibido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación¹, por lo cual se ordenó su registro con la clave de expediente SUP-RAP-278/2018 y turnarlo al Felipe de la Mata Pizaña.

III. Sentencia Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, determinando en el Punto Resolutivo **ÚNICO**, lo que a continuación se transcribe:

*“**ÚNICO.** Se modifica la resolución impugnada, en lo que fue materia de impugnación, para los efectos precisados.*

¹ En adelante, Sala Superior

IV. Toda vez que en la ejecutoria recaída al recurso de apelación se ordenó a este Consejo General emitir una nueva determinación en la que se dejara sin efectos la conclusión 2_C4_P1, modificar la conclusión 2_C9_P1 en el que se sancionen solo 2 de los 5 espectaculares originalmente observados; y respecto de la conclusión 2_C11_P1 se considere que 3 de los 13 registros observados fueron realizados en tiempo y forma; con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables, en consecuencia la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de mérito.

C O N S I D E R A N D O

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44, numeral 1, incisos j); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos.

2. Que el cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Superior resolvió revocar parcialmente, el Dictamen Consolidado y la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificada con la clave **INE/CG1134/2018 e INE/CG1135/2018**, dictada por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en lo que fue materia de impugnación, por lo que se procede a modificar el Dictamen Consolidado y la Resolución de mérito, observando a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria.

3. Que, en la sección relativa al estudio de fondo, el órgano jurisdiccional señaló que:

“(…)

ESTUDIO DE FONDO

PRELIMINAR. Metodología para resolver la apelación. Los argumentos del PRI se analizarán por temas específicos. En cada uno se precisará el contenido

concreto de la resolución que es objeto de controversia, seguido del planteamiento del PRI, la decisión o calificación de ese argumento y, finalmente, la justificación de ello.

(...)

TEMA II. Comprobación de pago por servicios de operación en redes sociales y contratación de espacios publicitarios. (Conclusión 2_C4_P1)

1. Resolución impugnada

El INE consideró que el PRI omitió presentar la documentación soporte respecto de una operación contratada en línea, por concepto de servicios de operación en redes sociales y contratación de espacios publicitarios, cuyo monto asciende a \$329,440.00.

En virtud de ello, impuso una sanción equivalente al 50% (del monto involucrado), equivalente a \$164,720.00, para lo cual se estableció una reducción del 25% de la ministración mensual, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenerimiento de Actividades Ordinarias Permanentes.

2. Planteamiento

La sanción impuesta es desacertada puesto que, en respuesta al primer oficio de errores y omisiones, presentó la documentación requerida.

3. Decisión

Fundado, porque el recurrente sí presentó ante el SIF los documentos que comprueban los egresos por concepto de servicios de operación en redes sociales y contratación de espacios publicitarios cuyo monto asciende a \$329,440.00 pesos.

4. Justificación

Le asiste la razón porque del SIF se advierte que el PRI no fue omiso en presentar los comprobantes de pago requeridos a través del oficio INE/UTF/DA/32520/18, ni omiso en proporcionar las direcciones "URL" de los perfiles, páginas y/o cuentas electrónicas.

En efecto, a través del oficio de observaciones el INE requirió que comprobara, proporcionando determinada documentación y datos, egresos por concepto de servicios de operación en redes sociales y contratación de espacios publicitarios, por el monto de \$329,440.00 pesos.

En respuesta, el recurrente realizó las manifestaciones atinentes¹¹ y afirmó que adjuntaba la documentación soporte.

Sin embargo, en el Dictamen Consolidado y en la resolución controvertida el INE tuvo por no atendida la observación, y consideró que el PRI omitió presentar el comprobante de pago realizado por el servicio contratado por el intermediario con el proveedor extranjero.

Contrario a ello, se advierte que el PRI sí presentó los comprobantes de pago atinentes, que amparan tanto las transferencias electrónicas, como las facturas.

En efecto, se advierte que se cuenta con la documentación soporte respecto de las operaciones contratadas en línea, por concepto de servicios de operación en redes sociales y contratación de espacios publicitarios cuyos montos son de \$3,480.00 pesos y de \$325,960.00 pesos, respectivamente; lo que hace un monto total de \$329,440.00 pesos.

En el Anexo I de esta sentencia, se observa la documentación.

Por tanto, si el recurrente no incurrió en la omisión respecto de la cual se le sancionó, entonces se debe REVOCAR la sanción.

Finalmente, como el PRI alcanzó su pretensión en esta parte, es innecesario analizar que el INE supuestamente realizó una calificación que no corresponde con el análisis de la conclusión en estudio.

En consecuencia, se debe revocar de manera lisa y llana esta parte de la resolución impugnada.

(...)

TEMA V. Monitoreo de espectaculares. (Conclusión 2_C9_P1)

1. Resolución impugnada

El INE consideró que el PRI omitió reportar en el SIF, los egresos generados por concepto de espectaculares y propaganda colocada en la vía pública-transporte público, por un monto de \$52,700.24.

En virtud de ello, impuso una sanción equivalente al 100% (del monto involucrado), cantidad que asciende a \$52,700.24, para lo cual se reducirá el 50% de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de

Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes.

2. Planteamiento

El recurrente aduce que en el SIF se detallan los números de pólizas de los gastos relativos a contratación de renta de espectaculares y medallones en transporte público; de ahí que, a su decir, es inexistente la infracción respecto de la cual se le sanciona.

3. Decisión

Parcialmente fundado, porque si bien el INE consideró que el PRI omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de cinco espectaculares y una propaganda colocada en la vía pública-transporte público, también lo es que, de los cinco espectaculares, tres si cuentan con evidencia en el SIF.

Por tanto, únicamente persiste la omisión de reportar dos espectaculares y una propaganda colocada en la vía pública-transporte público.

4. Justificación

A fin de evidenciar que asiste parcialmente la razón al recurrente, importa tener presente cómo ocurrió el procedimiento de fiscalización; en tal virtud enseguida se narra lo acontecido.

En el oficio de errores y omisiones del primer periodo, el INE sostuvo que, derivado de un monitoreo, observó que el PRI realizó gastos de propaganda en la vía pública que no fueron reportados.

En respuesta a dicho oficio, el PRI argumentó que la observación efectuada había quedado registrada en el SIF. Al respecto, insertó una tabla en la cual referenció a cuál póliza correspondía cada uno de los gastos observados.

De un análisis de la respuesta del apelante, el INE concluyó, en esencia, que el PRI no se había pronunciado respecto de los gastos relacionados con "panorámicos o espectaculares" y que había sido omiso en presentar la relación pormenorizada de los espectaculares colocados en la vía pública, a fin de que se pudiera realizar la compulsa correspondiente.

En virtud de lo anterior y para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos supuestamente no reportados, el INE empleó la matriz de precios y concluyó que el PRI había sido omiso en reportar una propaganda en transporte público y cinco espectaculares valuados en un total de \$52,700.24.

Sin embargo, para esta Sala Superior, cuando el PRI dio respuesta al oficio de errores y omisiones sí se pronunció respecto de los gastos relacionados con "panorámicos o espectaculares".

Lo anterior, porque insertó una tabla respecto de la cual refirió que, en relación a los espectaculares ahí referenciados, todos se encontraban debidamente reportados, la cual es del tenor literal siguiente:

CONS. ANEXO	PERIODO ELECTORAL	ID ENCUESTA	TICKET	INE-RNP	AVISO DE CONTRATACION
8	CAMPAÑA	144578	72190	INE-RNP-0000000121453	CAC11913
12	CAMPAÑA	164342	102129	INE-RNP-0000000164852	CAC12956
13	CAMPAÑA	168406	108603	INE-RNP-0000000121439	CAC11913
14	CAMPAÑA	173898	102058	INE-RNP-0000000132413	CAC12964
19	CAMPAÑA	179693	115328	INE-RNP-0000000147581	CAC12964

Al respecto, este órgano jurisdiccional realizó la búsqueda atinente a partir del número identificador, de acuerdo con el Registro Nacional de Proveedores, de la propaganda supuestamente no reportada que la responsable identificó en la tabla del Anexo 1_P1

Al efecto obtuvo la información siguiente:

No	Tipo de anuncio	ID INE	Conclusión de esta Sala Superior respecto de la revisión del SIF
1	Panorámicos o espectaculares	INE-RNP-121453	Sí se reportó. En el SIF se verificó la póliza 1, del periodo 2, póliza normal, subtipo diario. Fecha de la operación 01-06-2018..
2	Panorámicos o espectaculares	INE-RNP-121439	Sí se reportó. En el SIF se verificó la póliza 1, del periodo 2. póliza normal, subtipo diario. Fecha de la operación 01-06-2018.
3	Panorámicos o espectaculares	INE-RNP-132375	No se encontró reporte alguno
4	Panorámicos o espectaculares	INE-RNP-164852	Sí se reportó. En el SIF se verificó la póliza 2. del periodo 2. póliza normal. subtipo diario. Fecha de la o eración O 1-06-2018.
5	Panorámicos o espectaculares	INE-RNP-168148	No se encontró reporte alguno
6	Medios de transporte publico	N/A	No se encontró reporte alguno.

Por tanto, de los 5 espectaculares respecto de los que supuestamente la responsable sostiene que el recurrente no se pronunció, se tiene que:

Primero: En respuesta al oficio de observaciones, el recurrente sí se pronunció por la totalidad de los espectaculares y, en cambio, no realizó pronunciamiento alguno respecto de la publicidad en un medio de transporte público.

Segundo: De una revisión del SIF se tiene que, de la propaganda que fue motivo de monitoreo, se encontraron las pólizas, contratos, relación de espectaculares y fotografías de 3 de los 5 observados.

Esto es, contrario a lo considerado por la autoridad administrativa jurisdiccional, en el SIF sí se reportaron los espectaculares identificados con las claves siguientes:

<i>Espectacular INE-RNP-121453</i>
<i>Espectacular INE-RNP-121439</i>
<i>Espectacular INE-RNP-164852</i>

En cambio, en el citado sistema, tal y como lo consideró la responsable, no se encontró evidencia respecto de dos espectaculares en vía pública ni del de transporte público, con las referencias siguientes:

<i>Espectacular INE-RNP-132375</i>
<i>Espectacular INE-RNP-168148</i>
<i>Publicidad de medio de transporte público</i>

*Por tanto, se considera **parcialmente fundado** el motivo de disenso.*

*En consecuencia, procede **revocar** la sanción impuesta, **para el efecto** de que el INE tome en cuenta que, respecto de los tres espectaculares siguientes sí se encontró en el SIF la documentación requerida, en las pólizas que enseguida se enlistan:*

<i>ID INE</i>	<i>UBICACIÓN EN EL SIF</i>
<i>INE-RNP-121453</i>	<i>Se verificó la póliza 1, del periodo 2, póliza normal, subtipo diario. Fecha de la operación 01-06-2018</i>
<i>INE-RNP-121439</i>	<i>Se verificó la póliza 1, del periodo 2, póliza normal, subtipo diario. Fecha de la operación 01-06-2018</i>
<i>INE-RNP-164852</i>	<i>Se verificó la póliza 2, del periodo 2, póliza normal, subtipo diario. Fecha de la operación 01-06-2018</i>

Por tanto, se ordena al INE que emita una nueva determinación en la cual excluya de sanción a los tres espectaculares citados y únicamente proceda a individualizarla e imponerla respecto de los dos espectaculares restantes (no

reportados en el SIF) y de la propaganda colocada en la vía pública-transporte público, tampoco reportada.

(...)

TEMA VII. Registro contable de operaciones en tiempo real.
(Conclusiones 2_C11_P1 y 2_C14_P2)

1. Resolución impugnada

El INE consideró que el PRI omitió realizar el registro contable de treinta (31) operaciones¹⁸ en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación.

2. Planteamiento

Aduce incongruencia en la resolución porque, por una parte, la propia responsable reconoce que no tomaría como registros extemporáneos las operaciones efectuadas los días 21, 25, 28, 29 y 31 de mayo, así como 19 de junio del año en curso, debido a que en esos días el SIF presentó fallas; mientras que, por otra, se le sanciona sin considerar que el sistema presentó fallas o anomalías en su funcionamiento en los días indicados.

3. Decisión

Parcialmente fundado el motivo de disenso porque, de treinta y un operaciones observadas al recurrente, le asiste la razón por cuanto hace a que tres de ellas sí se reportaron en tiempo; mientras veintiocho, tal y como lo considera la responsable, se reportaron excediendo los tres días posteriores en que se realizaron las operaciones.

Lo anterior, tomando en cuenta la propia determinación de la responsable, de no considerar como extemporáneos los registros de las operaciones efectuadas los días 21, 25, 28, 29 y 31 de mayo, así como 19 de junio del año en curso.

4. Justificación

En el oficio de errores y omisiones se observó al instituto político que existían registros contables reportados fuera de los plazos que establece la normatividad, toda vez que exceden los tres días posteriores en que se realizó la operación.

Al respecto, el apelante manifestó que en "casos específicos los registros fuera de tiempo se deben a anomalías en el SIF".

Del análisis de la citada respuesta, la responsable tuvo por no atendida la observación y determinó que los días 21, 25, 28, 29 y 31 de mayo, así como 19 de junio no se tomarían en consideración para el efecto de determinar extemporáneos los registros efectuados en esos días.

En consecuencia, sancionó al recurrente por cuanto hizo al reporte contable extemporáneo de treinta y un operaciones.

En contra de lo anterior el apelante endereza como motivo de disenso la falta de congruencia de la responsable; ya que, por un lado, esta señala los días que no considerará para determinar la extemporaneidad en el registro de las operaciones y, por otra, lo sanciona (sin considerarlos).

Sin embargo, de un análisis minucioso en el SIF, de las treinta y un operaciones que le fueron observadas al recurrente, se advierte que le asiste la razón por cuanto hace a que tres de ellas sí se reportaron en tiempo; mientras veintiocho de ellas, tal y como lo considera la responsable, se reportaron excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación.

Para una mejor comprensión de lo anterior, en el Anexo II de esta sentencia se inserta una tabla explicativa a través de la cual es posible advertir de cuál observación se trata (2_C11_P1 ó 2_C14_P2), póliza o registro contable, importe, fecha de operación y de registro

Asimismo, se indica cuál era en plazo para reportar y la conclusión a la que llega esta Sala Superior respecto de la oportunidad o extemporaneidad del respectivo reporte del registro contable.

De la trasunta tabla se advierte que, únicamente respecto de la conclusión 2_C11_P1, en los consecutivos 11, 12 y 13, resulta incorrecta la sanción que impuesta al recurrente.

Lo anterior sobre la base de tomar en cuenta la determinación de la responsable, de no considerar los días 21, 25, 28, 29 y 31 de mayo, así como 19 de junio, como registros extemporáneos.

Para una mayor claridad se explica cada caso en concreto.

	Póliza	Descripción de la póliza	Importe	Fecha de Operación	Fecha de Registro	Plazo para reportar	Conclusión de la Sala Superior
11	PN/EG-18/20-0518	Transferencia 13125080, anticipo de	7,315.00	19/06/2018	23/05/2018	20, 22 y 23 de mayo	Es incorrecta la sanción

	<i>Póliza</i>	<i>Descripción de la póliza</i>	<i>Importe</i>	<i>Fecha de Operación</i>	<i>Fecha de Registro</i>	<i>Plazo para reportar</i>	<i>Conclusión de la Sala Superior</i>
		<i>por renta de espectacular para campaña del candidato del candidato a presidente municipal del Municipio de Cuautla Morelos, Proceso Electoral 2017-2018</i>					<i>porque se reporto dentro del plazo</i>
12		<i>Tranferencia 13125096, Finiquito por renta de espectacular para campaña del candidato del candidato a presidente municipal del Municipio de Cuautla Morelos, Proceso Electoral 2017-2018</i>	14,630.00	19/06/2018	23/05/2018	20, 22 y 23 de mayo	<i>Es incorrecta la sanción porque se reporto dentro del plazo</i>

En los consecutivos #11 y #12 se advierte que la responsable no tuvo presente que había que descontar el veintiuno de mayo (21/05/2018) del plazo establecido para reportar.

Por tanto, si ambas operaciones se realizaron el diecinueve de mayo (19/05/2018), el plazo para reportar transcurrió del veinte al veintitrés siguiente, descontando el veintiuno, por así haberlo determinado la responsable; por tanto, si las operaciones se registraron el propio veintitrés, resulta inconcuso que se realizaron dentro del plazo legal para tal efecto. En consecuencia, asiste la razón al recurrente, por cuanto hace al registro en tiempo de las citadas operaciones.

Caso similar acontece con el consecutivo #13, respecto del cual se tiene lo siguiente:

	<i>Póliza</i>	<i>Descripción de la póliza</i>	<i>Importe</i>	<i>Fecha de Operación</i>	<i>Fecha de Registro</i>	<i>Plazo para reportar</i>	<i>Conclusión de la Sala Superior</i>
13	PN/EG-23/26-05-18	Transferencia en especie del Cde. Para Gastos de Campaña del candidato a Diputado por el Distrito 11	\$10,000.	26/05/2018	30/05/2018	27, 30 y 31 de mayo (se descuentan los días 28 y 29)	Es incorrecta la sanción porque se reporto dentro del plazo

La responsable no tuvo presente que había que descontar los días veintiocho y veintinueve de mayo, del plazo establecido para reportar.

Por tanto, si la operación se realizó el veintiséis de mayo (26/05/2018), el plazo para reportar transcurrió del veintisiete al treinta y uno siguiente, descontando los días veintiocho y veintinueve, por así haberlo determinado la responsable; por tanto, si la operación se registró el treinta de mayo, resulta inconcuso que ésta se realizó dentro del plazo legal para tal efecto.

En consecuencia, asiste la razón al recurrente, por cuanto hace al registro en tiempo de la citada operación.

En mérito de lo anterior, ante lo incorrecto de la sanción impuesta al recurrente, por haberse considerado que treinta y un registros contables se registraron excediendo los tres posteriores en que se realizó la operación, cuando lo correcto es que solamente veintiocho de ellas se realizaron fuera del plazo legal y tres de ellas ocurrieron en tiempo real, se ordena al INE lo siguiente:

Revocar la sanción impuesta en la conclusión 2_C11_P1 (dejando firme la relativa a la conclusión 2_C14_P2), **para el efecto** de que la responsable emita una nueva determinación en la que considere que los registros de las pólizas referenciadas con los numerales PN/EG-18/20-05-18, PN/EG-19/20-05-18, y PN/EG-23/26-05-18, se realizaron en tiempo real, sin exceder los tres posteriores en que se realizó la operación y, en consecuencia, se disminuya, en la parte atinente, la sanción inicialmente impuesta.

(...)

EFFECTOS.

-Por lo que hace al “TEMA II” relacionado con la conclusión 2_C4_P1, lo procedente es revocar, lisa y llanamente, la sanción impuesta.

- Tocante al "TEMA V" relacionado con la conclusión 2_C9_P1, lo procedente es revocar la sanción impuesta para el efecto de que el INE tome en cuenta que, respecto de los tres espectaculares siguientes, si se encontró en el SIF la documentación requerida, en las pólizas que enseguida se enlistan:

ID INE	Ubicación en el SIF
INE-RNP-121453	Se verificó la póliza 1, del periodo 2, póliza normal, subtipo diario, Fecha de operación 01-06-2018
INE-RNP-121439	Se verificó la póliza 1, del periodo 2, póliza normal, subtipo diario, Fecha de operación 01-06-2018
INE-RNP-164852	Se verificó la póliza 2, del periodo 2, póliza normal, subtipo diario, Fecha de operación 01-06-2018

- Por tanto, se ordena al INE que modifique la sanción inicialmente impuesta en la conclusión 2_C9_P1 y emita una nueva determinación en la que excluya a los tres espectaculares citados y realice la debida individualización únicamente respecto de los dos espectaculares restantes (no reportados en el SIF) y de la propaganda colocada en la vía pública-transporte público, tampoco reportada.

- Respecto al "TEMA VII", únicamente por lo que hace a la conclusión 2_C11_P1, lo procedente es Revocar la sanción impuesta para el efecto de que la responsable emita una nueva determinación en la que considere que los registros de las pólizas referenciadas con los numerales PN/EG-18/20-05-18, PN/EG-19/20-05-18, y PN/EG-23/26-05-18, se realizaron en tiempo real, sin exceder los tres posteriores en que se realizó la operación y, en consecuencia, se disminuya, en la parte atinente, la sanción inicialmente impuesta.

- El INE deberá informar a esta Sala Superior del cumplimiento dado a la presente ejecutoria, dentro de las cuarenta y ocho horas de que ello suceda.

(...)"

4. Que de la lectura del SUP-RAP-275/2018, se desprende que en relación con la conclusión 2_C4_P1 la Sala Superior determinó que lo procedente es revocar, lisa y llanamente, la sanción impuesta, respecto la conclusión 2_C9_P1, 2_ se determinó que lo procedente es revocar la sanción impuesta para el efecto de que el INE tome en cuenta que, respecto de tres espectaculares, si se encontró en el SIF la documentación requerida, y por lo que hace a la conclusión C11_P1, el órgano jurisdiccional determinó que lo procedente es revocar la sanción impuesta para el efecto de que la responsable emita una nueva determinación en la que considere que los registros de las pólizas referenciadas con los numerales PN/EG-18/20-05-18, PN/EG-19/20-05-18, y PN/EG-23/26-05-18, se realizaron en tiempo real, sin exceder los tres posteriores en que se realizó la operación y, en consecuencia, se disminuya, en la parte atinente, la sanción inicialmente impuesta.

5. Para dar cumplimiento a la determinación de la Sala Superior en el SUP-RAP-275/2018, esta autoridad electoral procedió a acatar en los términos ordenados en la referida sentencia, de acuerdo a lo siguiente:

Sentencia	Efectos	Acatamiento
<p>Modificar el Dictamen Consolidado y la resolución INE/CG1135/2018 emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.</p>	<p>Respecto a la conclusión 2_C4_P1, la Sala Superior, determinó revocar, lisa y llanamente, la sanción impuesta.</p> <p>Respecto a la conclusión 2_C9_P1, lo procedentes es revocar la sanción impuesta para el efecto de que el INE tome en cuenta que, respecto a tres espectaculares sí se encontró en el SIF la documentación requerida, por tanto, se ordenó se modificó la sanción inicialmente impuesta en la conclusión de mérito y se emita una nueva determinación, donde se excluya a los tres espectaculares citados y realice la debida individualización únicamente respecto de los dos espectaculares restantes (no reportados en el SIF) y de la propaganda colocada en la vía pública-transporte público, tampoco reportada.</p> <p>Finalmente, por lo que hace a la conclusión 2_C11_P1, lo precedente es Revocar la sanción impuesta para el efecto de que se emita una nueva determinación en la que considere que los registros de las pólizas referenciadas con los numerales PN/EG-18/20-05-18, PN/EG-19/20-05-18, y PN/EG-23/26-05-18, se realizaron en tiempo real, sin exceder los tres posteriores en que se realizó la operación y, en consecuencia, se disminuya, en la parte atinente, la sanción inicialmente impuesta.</p>	<p>- Respecto a la conclusión 2_C4_P1, en términos de lo mandatado por la Sala Superior, se deja sin efectos la sanción impuesta.</p> <p>- Por lo que hace a la conclusión 2_C9_P1 se realizó una nueva individualización considerando únicamente dos de los cinco espectaculares, y un anuncio colocado en la vía pública-transporte público, toda vez que respecto a los espectaculares identificados con los números INE-RNP-121453, INE-RNP-121439 e INE-RNP-164852 se verificó que los mismos se encontraban registrados en el SIF.</p> <p>- Finalmente, respecto a la conclusión 2_C11_P1 se realizó una nueva individualización considerando únicamente diez de las trece operaciones registradas fuera de tiempo real, toda vez que respecto a las pólizas PN/EG-18/20-05-18, PN/EG-19/20-05-18 y PN/EG-23/26-05-18 se determinó que estas fueron registradas en tiempo.</p>

6. En tanto la Sala Superior determinó revocar la Resolución impugnada (conclusiones 2_C4_P1, 2_C9_P1 y 2_C11_P1) para los siguientes efectos:

- Conclusión 2_C4_P1, la Sala Superior determinó revocar, lisa y llanamente, la sanción impuesta.
- Respecto a la conclusión 2_C9_P1, se revocó la sanción impuesta para el efecto de que se emita una nueva determinación, donde se excluya tres de los cinco espectaculares observador y se realice la debida individualización únicamente respecto de los dos espectaculares restantes (no reportados en el SIF) y de la propaganda colocada en la vía pública-transporte público, tampoco reportada.
- Por lo que hace a la conclusión 2_C11_P1, lo procedente es Revocar la sanción impuesta para el efecto de que se emita una nueva determinación en la que considere que los registros de las pólizas referenciadas con los numerales PN/EG-18/20-05-18, PN/EG-19/20-05-18, y PN/EG-23/26-05-18, se realizaron en tiempo real, sin exceder los tres posteriores en que se realizó la operación y, en consecuencia, se disminuya, en la parte atinente, la sanción inicialmente impuesta

En este sentido, este Consejo General procede a realizar la modificación al Dictamen INE/CG1134/2018, en los siguientes términos

DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE CAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017 – 2018 EN EL ESTADO DE MORELOS

3.16 PRI Morelos

(...)

Conclusión 2_C4_P1

Gastos de propaganda exhibida en páginas de internet

De la revisión al rubro "Gastos de propaganda exhibida en páginas de internet", se identificaron registros contables por concepto de manejo de redes sociales; sin embargo, se observó que el sujeto obligado omitió presentar las direcciones URL de los perfiles, páginas y/o cuentas respectivas en las cuales se realizó la propaganda; así como los comprobantes de pago por el servicio contratado realizados por el intermediario con el proveedor extranjero.

Cons	Referencia Contable	Concepto	Importe
1	PN/EG-8/22-05-18	Registro del gasto por eliminación del pasivo de póliza de diario 20, en la cual el concepto fue erróneo, debe decir por la contratación para la operación en redes sociales	\$325,960.00
2	PN/EG-9/22-05-18	Registro del gasto por eliminación del pasivo de póliza de diario 21	3,480.00
Total			\$329,440.00

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la observación antes citada fue notificada mediante el oficio de errores y omisiones núm. INE/UTF/DA/32520/18, de fecha 10 de junio de 2018, en el módulo de notificaciones electrónicas del SIF, el mismo día.

Fecha de vencimiento del oficio de errores y omisiones: 15 de junio de 2018.

Con escrito de respuesta: sin número de fecha, 15 de junio de 2018, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:

"De la referencia contable PN/EG-8/22-05-18, manifestamos que se canceló por error en su captura con la póliza de ajuste número 3 de fecha 23 de mayo de 2018.

*Con la referencia contable PN/EG-9/22-05-18, en la misma póliza cuando se realizó el asiento correspondiente en fecha 22 de mayo 2018, se adjuntaron las evidencias, identificándose como archivos: jorgemeade18.com TESTIGO.pdf, jorgemeade.mx TESTIGO.pdf y JORGE MEADE MX TESTIGO.JPG. y las ligas que proceden de las direcciones URL con los perfiles son las siguientes: <https://jorgemeade.mx/> y www.jorgemeade18.com (*dominio enlazado con el anterior). (Observación Solventada)."*

No atendida

De la revisión al SIF, se determinó lo siguiente:

De la póliza PN/EG-8/22-05-18, el sujeto obligado argumentó que fue cancelada con la póliza PN/AJ-3/23-05-18, durante el periodo de corrección del periodo 1, registrando la operación correcta en la póliza PN/EG-10/22-05-18, y PN/EG-9/22-05-18 en ambos casos omitió, sin embargo, omitió presentar el comprobante de pago realizado por el servicio contratado por el intermediario con el proveedor extranjero, de los casos señalados en el cuadro siguiente:

<i>Cons.</i>	<i>Entidad</i>	<i>Referencia Contable</i>	<i>Fecha de Operación</i>	<i>Nombre del Proveedor</i>	<i>Descripción de la póliza</i>	<i>Importe</i>
1	Morelos	PN/EG-8/22-05-18	22/05/2018	Mpower Media SA de CV.	Registro del gasto por eliminación del pasivo de póliza de diario 20, en la cual el concepto fue erróneo, debe decir por la contratación para la operación en redes sociales	\$325,960.00
2	Morelos	PN/EG-9/22-05-18	22/05/2018	Mpower Media SA de CV.	Registro del gasto por eliminación del pasivo de póliza de diario 21	\$3,480.00
						\$329,440.00

Por tal razón la observación **quedó no atendida**

Conclusión 2_C4_P1

El sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte respecto de una operación contratada en línea por concepto de servicios de operación en redes sociales y contratación de espacios publicitarios cuyo monto es de \$329,440.00

Acatamiento a la Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expediente SUP-RAP-275/2018.

El 4 de septiembre de 2018, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-

275/2018 determinando revocar lisa y llanamente la resolución INE/CG1135/2018, en lo tocante a la conclusión 2_C4_P1, emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de las y los candidatos a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Morelos, en relación al Partido Revolucionario Institucional al estimarse que:

“

(...)

TEMA 11. Comprobación de pago por servicios de operación en redes sociales y contratación de espacios publicitarios. (Conclusión 2_C4_P1)

1. Resolución impugnada

El INE consideró que el PRI omitió presentar la documentación soporte respecto de una operación contratada en línea, por concepto de servicios de operación en redes sociales y contratación de espacios publicitarios, cuyo monto asciende a \$329,440.00.

En virtud de ello, impuso una sanción equivalente al 50% (del monto involucrado), equivalente a \$164,720.00, para lo cual se estableció una reducción del 25% de la ministración mensual, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes.

2. Planteamiento

La sanción impuesta es desacertada puesto que, en respuesta al primer oficio de errores y omisiones, presentó la documentación requerida.

3. Decisión

Fundado, porque el recurrente sí presentó ante el SIF los documentos que comprueban los egresos por concepto de servicios de operación en redes sociales y contratación de espacios publicitarios cuyo monto asciende a \$329,440.00 pesos.

4. Justificación

*Le **asiste la razón** porque del SIF se advierte que el PRI no fue omiso en presentar los comprobantes de pago requeridos a través del oficio INE/UTF/DA/32520/18, ni omiso en proporcionar las direcciones "URL" de los perfiles, páginas y/o cuentas electrónicas.*

En efecto, a través del oficio de observaciones el INE requirió que comprobara, proporcionando determinada documentación y datos, egresos por concepto de servicios de operación en redes sociales y contratación de espacios publicitarios, por el monto de \$329,440.00 pesos.

En respuesta, el recurrente realizó las manifestaciones atinentes¹¹ y afirmó que adjuntaba la documentación soporte.

Sin embargo, en el Dictamen Consolidado y en la resolución controvertida el INE tuvo por no atendida la observación, y consideró que el PRI omitió presentar el comprobante de pago realizado por el servicio contratado por el intermediario con el proveedor extranjero.

Contrario a ello, se advierte que el PRI sí presentó los comprobantes de pago atinentes, que amparan tanto las transferencias electrónicas, como las facturas.

*En efecto, se advierte que se cuenta con la documentación soporte respecto de las operaciones contratadas en línea, por concepto de servicios de operación en redes sociales y contratación de espacios publicitarios cuyos montos son de \$3,480.00 pesos y de \$325,960.00 pesos, respectivamente; lo que hace un monto total de **\$329,440.00 pesos**.*

*En el **Anexo I** de esta sentencia, se observa la documentación.*

*Por tanto, si el recurrente no incurrió en la omisión respecto de la cual se le sancionó, entonces se debe **REVOCAR** la sanción.*

Finalmente, como el PRI alcanzó su pretensión en esta parte, es innecesario analizar que el INE supuestamente realizó una calificación que no corresponde con el análisis de la conclusión en estudio.

*Por lo que hace al “**Tema II**” relacionado con la conclusión **2_C4_P1**, lo procedente es **revocar, lisa y llanamente** la sanción impuesta.*

Conclusión 2_C4_P1

En consecuencia, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expediente SUP-RAP-275/2018, la observación relativa a que el sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte respecto de una operación contratada en línea por concepto de servicios de operación en redes sociales y contratación de espacios publicitarios cuyo monto es de \$329,440.00, se deja sin efectos.

Conclusión 2_C9_P1

Procedimientos de fiscalización

Monitoreos de espectaculares y propaganda en vía pública

Derivado del monitoreo, se observó que el sujeto obligado realizó gastos de propaganda en la vía pública que no fueron reportados en los informes. Lo anterior como se detalla en el Anexo 1_Obs_21 del oficio de errores y omisiones no. INE/UTF/DA/32520.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la observación antes citada fue notificada mediante el oficio de errores y omisiones núm. INE/UTF/DA/32520/18, de fecha 10 de junio de 2018, en el módulo de notificaciones electrónicas del SIF, el mismo día.

Fecha de vencimiento del oficio de errores y omisiones: 15 de junio de 2018.

Con escrito de respuesta: sin número de fecha, 15 de junio de 2018, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Esta observación ha quedado debidamente registrada en el SIF como documentación anexa al informe en un archivo identificado con el nombre de 1 Anexo_Obs_21_P1_PRI. En este mismo documento, en la columna referencia contable se manifiesta a qué póliza corresponde cada uno de los gastos observados. Cabe aclarar que dentro de la información presentada en el SIF como otra documentación anexa, se podrá apreciar que algunos o alguien sin el consentimiento del candidato a Gobernador del Estado de Morelos Jorge Armando Meade Ocaranza, rotularon bardas con los logotipos y mensajes de nuestra campaña sin tener el consentimiento del candidato y del Propio CDE del PRI Morelos; por tal motivo en documentación oficial que fue entregada en su representación local se manifiesta ante esa autoridad electoral el deslinde de este ilícito conforme a lo establecido en el Artículo 212 del Reglamento de Fiscalización, mismo que se encuentra registrado en la documentación anexa del informe del SIF. Por otra parte derivado del monitoreo, se observó que el sujeto obligado realizó gastos de propaganda en la vía pública que no fueron reportados en los informes, se manifiesta que en relación en los Espectaculares referidos en el Anexo 1_Obs_21 del Oficio

de Errores y Omisiones, todos se encuentran debidamente reportados de acuerdo con el siguiente cuadro:

...

(Observación Solventada)."

No atendida.

De la revisión al SIF y de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, se determinó lo siguiente:

De los gastos señalados con (1) en la columna "Referencia" del Anexo 1_P1 del presente Dictamen, se constató que el sujeto obligado registró el gasto de las lonas colocadas en la vía pública, en la póliza PN/DR-2/01-05-18 del periodo 1, presentando muestras de la propaganda, por tal razón, la observación quedó atendida.

Referente a los gastos señalados con (2) en la columna "Referencia" del Anexo 1_P1 del presente Dictamen, el sujeto obligado presentó un escrito sin número recibido por esta autoridad el día 15 de junio de 2018, referente a el deslinde de gastos de 6 bardas, al cual se le dará seguimiento en el segundo periodo de campaña.

Respecto a los gastos señalados con (3) en la columna "Referencia" del **Anexo 1_P1 del presente Dictamen**, el sujeto obligado no se pronunció al respecto, adicionalmente se constató que omitió presentar la relación pormenorizada de los espectaculares colocados en la vía pública, la cual permitiera a esta autoridad fiscalizadora realizar la compulsa correspondiente, por tal razón la observación **quedó no atendida**.

Los testigos de los gastos no reportados se detallan en el **Anexo 2_P1 del presente Dictamen**.

Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado en beneficio de sus candidatos, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF descrito en el apartado correspondiente del presente Dictamen.

Identificación del costo para valuación en la Matriz de Precios
(Pesos)

Cotizaciones	Proveedor o aportante	Municipio	Concepto	Unidad de medida	Importe con IVA
8347	Asesoría y Gestoría Elick S.A de C.V	Morelos	Traslado de personal	Servicio	1,392.00
7898	Comercializadora y Fiadora de Artículos Mexiquences	Cuautla	Espectaculares	Metro cuadrado	439.81

Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen Consolidado la matriz de precios correspondiente a la entidad.

La determinación del costo se presenta en el anexo II-A, “Monitoreo en vía pública” Cons. 1 al 6.

De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar 1 propaganda en transporte público y 5 valuados en **\$52,700.24**

2_C9_P1

El sujeto obligado omitió reportar en el SIF, los egresos generados por concepto de espectaculares y propaganda colocada en la vía pública, por un monto de \$52,700.24.

Acatamiento a la Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expediente SUP-RAP-275/2018.

El 4 de septiembre de 2018, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-275/2018 determinando revocar la Resolución INE/CG1135/2018, particularmente en lo tocante a la conclusión 2_C9_P1, emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de las y los candidatos a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Morelos, en relación al Partido Revolucionario Institucional al estimarse que:

“

(...)

TEMA V. Monitoreo de espectaculares. (Conclusión 2_C9_P1)

1. Resolución impugnada

El INE consideró que el PRI omitió reportar en el SIF, los egresos generados por concepto de espectaculares y propaganda colocada en la vía pública-transporte público, por un monto de \$52,700.24.

En virtud de ello, impuso una sanción equivalente al 100% (del monto involucrado), cantidad que asciende a \$52,700.24, para lo cual se reducirá el 50% de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes.

2. Planteamiento

El recurrente aduce que en el SIF se detallan los números de pólizas de los gastos relativos a contratación de renta de espectaculares y medallones en transporte público; de ahí que, a su decir, es inexistente la infracción respecto de la cual se le sanciona.

3. Decisión

Parcialmente fundado, porque si bien el INE consideró que el PRI omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de cinco espectaculares y una propaganda colocada en la vía pública-transporte público, también lo es que, de los cinco espectaculares, tres sí cuentan con evidencia en el SIF.

Por tanto, únicamente persiste la omisión de reportar dos espectaculares y una propaganda colocada en la vía pública-transporte público.

4. Justificación

*A fin de evidenciar que **asiste parcialmente la razón** al recurrente, importa tener presente cómo ocurrió el procedimiento de fiscalización; en tal virtud enseguida se narra lo acontecido.*

En el oficio de errores y omisiones del primer periodo, el INE sostuvo que, derivado de un monitoreo, observó que el PRI realizó gastos de propaganda en la vía pública que no fueron reportados.

En respuesta a dicho oficio, el PRI argumentó que la observación efectuada había quedado registrada en el SIF. Al respecto, insertó una tabla en la cual referenció a cuál póliza correspondía cada uno de los gastos observados.

De un análisis de la respuesta del apelante, el INE concluyó, en esencia, que el PRI no se había pronunciado respecto de los gastos relacionados con "panorámicos o espectaculares" y que había sido omiso en presentar la

relación pormenorizada de los espectaculares colocados en la vía pública, a fin de que se pudiera realizar la compulsa correspondiente.

En virtud de lo anterior y para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos supuestamente no reportados, el INE empleó la matriz de precios y concluyó que el PRI había sido omiso en reportar una propaganda en transporte público y cinco espectaculares valuados en un total de \$52,700.24.

Sin embargo, para esta Sala Superior, cuando el PRI dio respuesta al oficio de errores y omisiones sí se pronunció respecto de los gastos relacionados con "panorámicos o espectaculares".

Lo anterior, porque insertó una tabla respecto de la cual refirió que, en relación a los espectaculares ahí referenciados, todos se encontraban debidamente reportados, la cual es del tenor literal siguiente:

(...)

Al respecto, este órgano jurisdiccional realizó la búsqueda atinente a partir del número identificador, de acuerdo con el Registro Nacional de Proveedores, de la propaganda supuestamente no reportada que la responsable identificó en la tabla del Anexo 1_P1.

(...)

Por tanto, de los 5 espectaculares respecto de los que supuestamente la responsable sostiene que el recurrente no se pronunció, se tiene que:

Primero: En respuesta al oficio de observaciones, el recurrente sí se pronunció por la totalidad de los espectaculares y, en cambio, no realizó pronunciamiento alguno respecto de la publicidad en un medio de transporte público.

Segundo: De una revisión del SIF se tiene que, de la propaganda que fue motivo de monitoreo, se encontraron las pólizas, contratos, relación de espectaculares y fotografías de 3 de los 5 observados.

Esto es, contrario a lo considerado por la autoridad administrativa jurisdiccional, en el SIF sí se reportaron los espectaculares identificados con las claves siguientes:

Espectacular INE-RNP-121453
Espectacular INE-RNP-121439
Espectacular INE-RNP-164852

En cambio, en el citado sistema, tal y como lo consideró la responsable, no se encontró evidencia respecto de dos espectaculares en vía pública ni del de transporte público, con las referencias siguientes:

Espectacular INE-RNP-132375
Es espectacular INE-RNP-168148
Publicidad en medio de transporte publico

Por tanto, se considera **parcialmente fundado** el motivo de disenso.

Tocante al “**Tema V**” relacionado con la conclusión **2_C9_P1**, lo procedente es **revocar** la sanción impuesta **para el efecto** de que el INE tome en cuenta que, respecto de los tres espectaculares siguientes, sí se encontró en el SIF la documentación requerida, en las pólizas que enseguida se enlistan:

ID INE	Ubicación en el SIF
INE-RNP-121453	Se verificó la póliza 1, del periodo 2, póliza normal, subtipo diario. Fecha de operación 01-06-2018
INE-RNP-121439	Se verificó la póliza 1, del periodo 2, póliza normal, subtipo diario. Fecha de operación 01-06-2018
INE-RNP-164852	Se verificó la póliza 2, del periodo 2, póliza normal, subtipo diario. Fecha de la operación 01-06-2018

Y se ordena:

“(…)

Por tanto, se **ordena** al INE que **modifique** la sanción inicialmente impuesta en la conclusión **2_C9_P1** y **emita una nueva determinación** en la excluya a los tres espectaculares citados y realice la debida individualización únicamente respecto de los dos espectaculares restantes (no reportados en el SIF) y de la propaganda colocada en la vía pública-transporte público, tampoco reportada.

Conclusión 2_C9_P1

Procedimientos de fiscalización

Monitoreos de espectaculares y propaganda en vía pública

Derivado del monitoreo, se observó que el sujeto obligado realizó gastos de propaganda en la vía pública que no fueron reportados en los informes. Lo anterior

como se detalla en el Anexo 1_Obs_21 del oficio de errores y omisiones no. INE/UTF/DA/32520.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la observación antes citada fue notificada mediante el oficio de errores y omisiones núm. INE/UTF/DA/32520/18, de fecha 10 de junio de 2018, en el módulo de notificaciones electrónicas del SIF, el mismo día.

Fecha de vencimiento del oficio de errores y omisiones: 15 de junio de 2018.

Con escrito de respuesta: sin número de fecha, 15 de junio de 2018, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Esta observación ha quedado debidamente registrada en el SIF como documentación anexa al informe en un archivo identificado con el nombre de 1 Anexo_Obs_21_P1_PRI. En este mismo documento, en la columna referencia contable se manifiesta a qué póliza corresponde cada uno de los gastos observados. Cabe aclarar que dentro de la información presentada en el SIF como otra documentación anexa, se podrá apreciar que algunos o alguien sin el consentimiento del candidato a Gobernador del Estado de Morelos Jorge Armando Meade Ocaranza, rotularon bardas con los logotipos y mensajes de nuestra campaña sin tener el consentimiento del candidato y del Propio CDE del PRI Morelos; por tal motivo en documentación oficial que fue entregada en su representación local se manifiesta ante esa autoridad electoral el deslinde de este ilícito conforme a lo establecido en el Artículo 212 del Reglamento de Fiscalización, mismo que se encuentra registrado en la documentación anexa del informe del SIF. Por otra parte derivado del monitoreo, se observó que el sujeto obligado realizó gastos de propaganda en la vía pública que no fueron reportados en los informes, se manifiesta que en relación en los Espectaculares referidos en el Anexo 1_Obs_21 del Oficio de Errores y Omisiones, todos se encuentran debidamente reportados de acuerdo con el siguiente cuadro:

...

(Observación Solventada).”

No atendida.

En acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expediente SUP-RAP-275/2018, de la revisión al SIF y de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, se constató lo siguiente:

De los gastos señalados con (1) en la columna “Referencia” del Anexo 1_P1 del presente Dictamen, se constató que el sujeto obligado registró el gasto de las lonas colocadas en la vía pública, en la póliza PN/DR-2/01-05-18 del periodo 1, así como los espectaculares registrados en las pólizas PN/DR-1/01-06-18 y PN/DR-2/01-06-18, presentando muestras de la propaganda, por tal razón, la observación quedó atendida.

Referente a los gastos señalados con (2) en la columna “Referencia” del Anexo 1_P1 del presente Dictamen, el sujeto obligado presentó un escrito sin número recibido por esta autoridad el día 15 de junio de 2018, referente a el deslinde de gastos de 6 bardas, al cual se le dará seguimiento en el segundo periodo de campaña.

Respecto a los gastos señalados con (3) en la columna “Referencia” del **Anexo 1_P1 del presente Dictamen**, el sujeto obligado no se pronunció al respecto, adicionalmente se constató que omitió presentar la relación pormenorizada de los espectaculares colocados en la vía pública, la cual permitiera a esta autoridad fiscalizadora realizar la compulsa correspondiente, por tal razón la observación **quedó no atendida**.

Los testigos de los gastos no reportados se detallan en el **Anexo 2_P1 del presente Dictamen**.

Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado en beneficio de sus candidatos, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF descrito en el apartado correspondiente del presente Dictamen.

Identificación del costo para valuación en la Matriz de Precios

(Pesos)

Cotizaciones	Proveedor o aportante	Municipio	Concepto	Unidad de medida	Importe con IVA
8347	Asesoría y Gestoría Elick S.A de C.V	Morelos	Traslado de personal	Servicio	1,392.00

Cotizaciones	Proveedor o aportante	Municipio	Concepto	Unidad de medida	Importe con IVA
7898	Comercializadora y Fiadora de Artículos Mexiquenses	Cuautla	Espectaculares	Metro cuadrado	439.81

Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen Consolidado la matriz de precios correspondiente a la entidad.

La determinación del costo se presenta en el anexo II-A, “Monitoreo en vía pública” Cons. 1 al 3.

En consecuencia, de lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar 1 propaganda en transporte público y 2 espectaculares valuados en conjunto en **\$22,793.16**

Conclusión 2_C9_P1

El sujeto obligado omitió reportar en el SIF, los egresos generados por concepto de espectaculares y propaganda colocada en la vía pública, por un monto de **\$22,793.16**

Conclusión 2_C11_P1

Sistema Integral de Fiscalización

Registro de operación fuera de tiempo

Se observaron registros contables reportados fuera de los plazos que establece la normatividad, toda vez que exceden los tres días posteriores en que se realizó la operación. Lo anterior se detalla a continuación:

Cons.	Nombre	ID	Póliza	Descripción de la póliza	Importe	Fecha de Operación	Fecha de Registro	Días extemporáneos transcurridos
1	Gobernador	46479	PN/DR-9/29-04-2018	Registro de comodato camioneta para transporte	\$ 8,713.45	29-04-2018	03-05-2018	1
2	Concentradora	41052	PN/EG-1/27-04-18	Transferencia Folio: 88404057 en efectivo para gastos de Campaña Del Candidato a Gobernador del Estado De Morelos	100,000.00	27/04/2018	01/05/2018	1
3	Concentradora	41052	PN/EG-7-07-05-18	Trasferencia Folio: 83168017 por pago de Prestación de Servicios para Estrategia Digital de Campañas Para El Proceso Electoral 2017-2018 De Los Candidatos Del Cde Del Partido	348,000.00	07/05/2018	11/05/2018	1

Cons.	Nombre	ID	Póliza	Descripción de la póliza	Importe	Fecha de Operación	Fecha de Registro	Días extemporáneos transcurridos
4	Concentradora	41052	PN/DR-9/-14-05-18	Renta de espectacular con servicio de impresión, montaje e instalación de lona frontal con medidas de 8.6 X 8.3 metros, Para La Campaña Del Candidato A Diputado Local Jaime Sanchez Velez	9,860.00	14/05/2018	23/05/2018	6
5	Concentradora	41052	PN/DR-10/20-05-18	Renta de espectaculares para campaña del candidato a Presidente Municipal de Cuernavaca, Victor Manuel Saucedo Perdomo	19,720.00	20/05/2018	25/05/2018	2
6	Concentradora	41052	PN/DR-1120/05-18	Renta de espectaculares para campaña del candidato a Presidente Municipal de Cuernavaca, Victor Manuel Saucedo Perdomo	29,580.00	20/05/2018	25/05/2018	2
7	Concentradora	41052	PN/EG-12/17-05-18	Transferencia folio: 1963020 en efectivo para gastos de campaña de la candidata a diputada por el Distrito 4 Del Estado De Morelos	10,000.00	17/05/2018	21/05/2018	1
8	Concentradora	41052	PN/EG-13/17-05-18	Transferencia Folio: 38937021 en efectivo para gastos de campaña de la candidata a Diputada por el Distrito 6 Del Estado De Morelos	30,000.00	17/05/2018	21/05/2018	1
9	Concentradora	41052	PN/EG-14/17-05-18	Transferencia Folio: 94392017 En Efectivo Para Gastos De Campaña Del Candidato A Gobernador Del Estado De Morelos	217,036.00	17/05/2018	21/05/2018	1
10	Concentradora	41052	PN/EG-17/17-05-18	Segunda Trasferencia Folio: 1963039 Por Pago de prestación de Servicios Para Estrategia Digital de Campañas Para El Proceso Electoral 2017-2018 de Los Candidatos del CDE del Partido	116,000.00	17/05/2018	22/05/2018	2
11	Concentradora	41052	PN/EG-18/20-05-18	Transferencia 13125080, anticipo de por renta de espectacular para campaña del candidato a presidente municipal del Municipio de Cuautla Morelos, Proceso Electoral 2017-2018	7,315.00	19/05/2018	23/05/2018	1
12	Concentradora	41052	PN/EG-19/20-05-18	Transferencia 13125096, Finiquito por renta de espectacular para Campaña del Candidato a Presidente Municipal Del Municipio De Cuautla Morelos, Proceso Electoral 2017-2018	14,630.00	19/05/2018	23/05/2018	1
13	Concentradora	41052	PN/EG-23/26-05-18	Transferencia en efectivo del Cde Para Gastos de Campaña del Candidato a Diputado por el Distrito 11	10,000.00	26/05/2018	30/05/2018	1

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la observación antes citada fue notificada mediante el oficio de errores y omisiones núm. INE/UTF/DA/32520/18, de fecha 10 de junio de 2018, en el módulo de notificaciones electrónicas del SIF, el mismo día.

Fecha de vencimiento del oficio de errores y omisiones: 15 de junio de 2018.

Con escrito de respuesta: sin número de fecha, 15 de junio de 2018, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:

“De lo anterior se manifiesta que en casos específicos los registros fuera de tiempo se deben a anomalías en el SIF lo cual nos dificulta hacer todos los registros dentro de los 3 días que estipula el RF.”

De la revisión al SIF, el sujeto obligado argumentó que, debido a anomalías en el uso del sistema, no pudo realizar el registro de sus operaciones en tiempo; aun y cuando esta autoridad.

La autoridad determinó que los días 21, 25, 28, 29 y 31 de mayo, así como 19 de junio no se tomaron en cuenta como registros extemporáneos, los señalados en el cuadro siguiente:

Cons.	Nombre	ID	Póliza	Descripción de la póliza	Importe	Fecha de Operación	Fecha de Registro	Días extemporáneos transcurridos
1	Gobernador	46479	PN/DR-9/29-04-2018	Registro de comodato camioneta para transporte	\$ 8,713.45	29-04-2018	03-05-2018	1
2	Concentrador a	41052	PN/EG-1/27-04-18	Transferencia Folio: 88404057 en efectivo para gastos de Campaña Del Candidato a Gobernador del Estado De Morelos	100,000.00	27/04/2018	01/05/2018	1
3	Concentrador a	41052	PN/EG-7-07-05-18	Trasferencia Folio: 83168017 por pago de Prestación de Servicios para Estrategia Digital de Campañas Para El Proceso Electoral 2017-2018 De Los Candidatos Del Cde Del Partido	348,000.00	07/05/2018	11/05/2018	1
4	Concentrador a	41052	PN/DR-9/-14-05-18	Renta de espectacular con servicio de impresión, montaje e instalación de lona frontal con medidas de 8.6 X 8.3 metros, Para La Campaña Del Candidato A Diputado Local Jaime Sanchez Velez	9,860.00	14/05/2018	23/05/2018	6
5	Concentrador a	41052	PN/DR-10/20-05-18	Renta de espectaculares para campaña del candidato a Presidente Municipal de Cuernavaca, Victor Manuel Saucedo Perdomo	19,720.00	20/05/2018	25/05/2018	2
6	Concentrador a	41052	PN/DR-1120/05-18	Renta de espectaculares para campaña del candidato a Presidente Municipal de Cuernavaca, Victor Manuel Saucedo Perdomo	29,580.00	20/05/2018	25/05/2018	2
7	Concentrador a	41052	PN/EG-12/17-05-18	Transferencia folio: 1963020 en efectivo para gastos de campaña de la candidata a diputada por el Distrito 4 Del Estado De Morelos	10,000.00	17/05/2018	21/05/2018	1

Cons.	Nombre	ID	Póliza	Descripción de la póliza	Importe	Fecha de Operación	Fecha de Registro	Días extemporáneos transcurridos
8	Concentradora	41052	PN/EG-13/17-05-18	Transferencia Folio: 38937021 en efectivo para gastos de campaña de la candidata a Diputada por el Distrito 6 Del Estado De Morelos	30,000.00	17/05/2018	21/05/2018	1
9	Concentradora	41052	PN/EG-14/17-05-18	Transferencia Folio: 94392017 En Efectivo Para Gastos De Campaña Del Candidato A Gobernador Del Estado De Morelos	217,036.00	17/05/2018	21/05/2018	1
10	Concentradora	41052	PN/EG-17/17-05-18	Segunda Trasferencia Folio: 1963039 Por Pago de prestación de Servicios Para Estrategia Digital de Campañas Para El Proceso Electoral 2017-2018 de Los Candidatos del CDE del Partido	116,000.00	17/05/2018	22/05/2018	2
11	Concentradora	41052	PN/EG-18/20-05-18	Transferencia 13125080, anticipo de por renta de espectacular para campaña del candidato a presidente municipal del Municipio de Cuautla Morelos, Proceso Electoral 2017-2018	7,315.00	19/05/2018	23/05/2018	1
12	Concentradora	41052	PN/EG-19/20-05-18	Transferencia 13125096, Finiquito por renta de espectacular para Campaña del Candidato a Presidente Municipal Del Municipio De Cuautla Morelos, Proceso Electoral 2017-2018	14,630.00	19/05/2018	23/05/2018	1
13	Concentradora	41052	PN/EG-23/26-05-18	Transferencia en efectivo del Cde Para Gastos de Campaña del Candidato a Diputado por el Distrito 11	10,000.00	26/05/2018	30/05/2018	1

Al respecto, la normativa establece que los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurre y hasta tres días posteriores a su realización, por tal razón, la observación quedó no atendida.

Conclusión 2_C11_P1

El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, de 13 operaciones, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$920,854.45

Acatamiento a la Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expediente SUP-RAP-275/2018.

El 4 de septiembre de 2018, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-

RAP-275/2018 determinando revocar la Resolución INE/CG1135/2018, particularmente en lo tocante a la conclusión 2_C11_P1, emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de las y los candidatos a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado Morelos, en relación al Partido Revolucionario Institucional al estimarse que:

“

(...)

1. Resolución impugnada

*El INE consideró que el PRI **omitió realizar el registro contable de treinta (31) operaciones** en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación.*

2. Planteamiento

Aduce incongruencia en la resolución porque, por una parte, la propia responsable reconoce que no tomaría como registros extemporáneos las operaciones efectuadas los días 21, 25, 28, 29 y 31 de mayo, así como 19 de junio del año en curso, debido a que en esos días el SIF presentó fallas; mientras que, por otra, se le sanciona sin considerar que el sistema presentó fallas o anomalías en su funcionamiento en los días indicados.

3. Decisión

***Parcialmente fundado** el motivo de disenso porque, de treinta y un operaciones observadas al recurrente, le asiste la razón por cuanto hace a que tres de ellas sí se reportaron en tiempo; mientras veintiocho, tal y como lo considera la responsable, se reportaron excediendo los tres días posteriores en que se realizaron las operaciones.*

Lo anterior, tomando en cuenta la propia determinación de la responsable, de no considerar como extemporáneos los registros de las operaciones efectuadas los días 21, 25, 28, 29 y 31 de mayo, así como 19 de junio del año en curso.

4. Justificación

En el oficio de errores y omisiones se observó al instituto político que existían registros contables reportados fuera de los plazos que establece la normatividad, toda vez que exceden los tres días posteriores en que se realizó la operación.

Al respecto, el apelante manifestó que en "casos específicos los registros fuera de tiempo se deben a anomalías en el SIF".

Del análisis de la citada respuesta, la responsable tuvo por no atendida la observación y determinó que los días 21, 25, 28, 29 y 31 de mayo, así como 19 de junio no se tomarían en consideración para el efecto de determinar extemporáneos los registros efectuados en esos días.

En consecuencia, sancionó al recurrente por cuanto hizo al reporte contable extemporáneo de treinta y un operaciones.

En contra de lo anterior el apelante endereza como motivo de disenso la falta de congruencia de la responsable; ya que, por un lado, esta señala los días que no considerará para determinar la extemporaneidad en el registro de las operaciones y, por otra, lo sanciona (sin considerarlos).

*Sin embargo, de un análisis minucioso en el SIF, de las treinta y un operaciones que le fueron observadas al recurrente, se advierte que le asiste la razón por cuanto hace a que **tres de ellas sí se reportaron en tiempo**; mientras veintiocho de ellas, tal y como lo considera la responsable, se reportaron excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación.*

*Para una mejor comprensión de lo anterior, en el **Anexo II** de esta sentencia se inserta una tabla explicativa a través de la cual es posible advertir de cuál observación se trata (2_C11_P1 ó 2_C14_P2), póliza o registro contable, importe, fecha de operación y de registro.*

Asimismo, se indica cuál era en plazo para reportar y la conclusión a la que llega esta Sala Superior respecto de la oportunidad o extemporaneidad del respectivo reporte del registro contable.

De la trasunta tabla se advierte que, únicamente respecto de la conclusión 2_C11_P1, en los consecutivos 11, 12 y 13, resulta incorrecta la sanción que impuesta al recurrente.

Lo anterior sobre la base de tomar en cuenta la determinación de la responsable, de no considerar los días 21, 25, 28, 29 y 31 de mayo, así como 19 de junio, como registros extemporáneos.

(...)

En los consecutivos #11 y #12 se advierte que la responsable no tuvo presente que había que descontar el veintiuno de mayo (21/05/2018) del plazo establecido para reportar.

Por tanto, si ambas operaciones se realizaron el diecinueve de mayo (19/05/2018), el plazo para reportar transcurrió del veinte al veintitrés siguiente, descontando el veintiuno, por así haberlo determinado la responsable; por tanto, si las operaciones se registraron el propio veintitrés, resulta inconcuso que se realizaron dentro del plazo legal para tal efecto. En consecuencia, asiste la razón al recurrente, por cuanto hace al registro en tiempo de las citadas operaciones.

Caso similar acontece con el consecutivo #13, respecto del cual se tiene lo siguiente:

(...)

La responsable no tuvo presente que había que descontar los días veintiocho y veintinueve de mayo, del plazo establecido para reportar.

Por tanto, si la operación se realizó el veintiséis de mayo (26/05/2018), el plazo para reportar transcurrió del veintisiete al treinta y uno siguiente, descontando los días veintiocho y veintinueve, por así haberlo determinado la responsable; por tanto, si la operación se registró el treinta de mayo, resulta inconcuso que ésta se realizó dentro del plazo legal para tal efecto.

En consecuencia, asiste la razón al recurrente, por cuanto hace al registro en tiempo de la citada operación.

En mérito de lo anterior, ante lo incorrecto de la sanción impuesta al recurrente, por haberse considerado que treinta y un registros contables se registraron excediendo los tres posteriores en que se realizó la operación, cuando lo correcto es que solamente veintiocho de ellas se realizaron fuera del plazo legal y tres de ellas ocurrieron en tiempo real, se ordena al INE lo siguiente:

Respecto al “Tema VII”, únicamente por lo que hace a la conclusión 2_C11_P1, lo procedente es Revocar la sanción impuesta para el efecto de que la responsable emita una nueva determinación en la que considere que los registros de las pólizas referenciadas con los numerales PN/EG-18/20-05-18, PN/EG-19/20-05-18 y PN/EG-23/26-05-18, se realizaron en tiempo real, sin exceder los tres posteriores en que se realizó la operación y, en consecuencia, se disminuya, en la parte atinente, la sanción inicialmente impuesta.”

Conclusión 2_C11_P1

Sistema Integral de Fiscalización

Registro de operación fuera de tiempo

En acatamiento a la Sentencia de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expediente SUP-RAP-275/2018 y de la revisión al SIF, se verificó que respecto a las pólizas ***PN/EG-18/20-05-18, PN/EG-19/20-05-18 y PN/EG-23/26-05-18 se realizaron en tiempo real, sin exceder los tres días posteriores en que se realizó la operación, por lo que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, respecto de 10 operaciones, mismas que se señalan en el cuadro siguiente:***

Cons.	Nombre	ID	Póliza	Descripción de la póliza	Importe	Fecha de Operación	Fecha de Registro	Días extemporáneos transcurridos
1	Gobernador	46479	PN/DR-9/29-04-2018	Registro de comodato camioneta para transporte	\$ 8,713.45	29-04-2018	03-05-2018	1
2	Concentrado ra	41052	PN/EG-1/27-04-18	Transferencia Folio: 88404057 en efectivo para gastos de Campaña Del Candidato a Gobernador del Estado De Morelos	100,000.00	27/04/2018	01/05/2018	1
3	Concentrado ra	41052	PN/EG-7-07-05-18	Trasferencia Folio: 83168017 por pago de Prestación de Servicios para Estrategia Digital de Campañas Para El Proceso Electoral 2017-2018 De Los Candidatos Del Cde Del Partido	348,000.00	07/05/2018	11/05/2018	1
4	Concentrado ra	41052	PN/DR-9/-14-05-18	Renta de espectacular con servicio de impresión, montaje e instalación de lona frontal con medidas de 8.6 X 8.3 metros, Para La Campaña Del Candidato A Diputado Local Jaime Sanchez Velez	9,860.00	14/05/2018	23/05/2018	6
5	Concentrado ra	41052	PN/DR-10/20-05-18	Renta de espectaculares para campaña del candidato a Presidente Municipal de Cuernavaca, Victor Manuel Saucedo Perdomo	19,720.00	20/05/2018	25/05/2018	2
6	Concentrado ra	41052	PN/DR-1120/05-18	Renta de espectaculares para campaña del candidato a Presidente Municipal de Cuernavaca, Victor Manuel Saucedo Perdomo	29,580.00	20/05/2018	25/05/2018	2
7	Concentrado ra	41052	PN/EG-12/17-05-18	Transferencia folio: 1963020 en efectivo para gastos de campaña de la candidata a diputada por el Distrito 4 Del Estado De Morelos	10,000.00	17/05/2018	21/05/2018	1
8	Concentrado ra	41052	PN/EG-13/17-05-18	Transferencia Folio: 38937021 en efectivo para gastos de campaña de la candidata a Diputada por el Distrito 6 Del Estado De Morelos	30,000.00	17/05/2018	21/05/2018	1

Cons.	Nombre	ID	Póliza	Descripción de la póliza	Importe	Fecha de Operación	Fecha de Registro	Días extemporáneos transcurridos
9	Concentrado ra	41052	PN/EG-14/17-05-18	Transferencia Folio: 94392017 En Efectivo Para Gastos De Campaña Del Candidato A Gobernador Del Estado De Morelos	217,036.00	17/05/2018	21/05/2018	1
10	Concentrado ra	41052	PN/EG-17/17-05-18	Segunda Transferencia Folio: 1963039 Por Pago de prestación de Servicios Para Estrategia Digital de Campañas Para El Proceso Electoral 2017-2018 de Los Candidatos del CDE del Partido	116,000.00	17/05/2018	22/05/2018	2

Al respecto, la normativa establece que los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurre y hasta tres días posteriores a su realización, por tal razón, la observación **quedó no atendida**.

Conclusión 2_C11_P1

El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, de **10 operaciones**, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de **\$888,909.45**

(...)

7. Que la Sala Superior revocó la resolución **INE/CG1135/2018**, particularmente el considerando 34.2, inciso c), conclusión 2_C4_P1; inciso d), conclusión 2_C9_P1 e inciso d), conclusión 2_C11_P1, atribuidas al Partido Revolucionario Institucional, por lo que este Consejo General procede a la modificación expresamente ordenada por ese órgano jurisdiccional, en los siguientes términos:

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, EN EL ESTADO DE MORELOS (PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES)

(...)

Que la Sala Superior revocó la resolución **INE/CG1135/2018**, particularmente el **considerando 34.2, inciso c), d) y e)** relativo a las conclusiones **2_C4_P1, 2_C9_P1 y 2_C11_P1, respectivamente, atribuidas al Partido Revolucionario Institucional**, por lo que este Consejo General procede a la modificación expresamente ordenada por ese órgano jurisdiccional, en los siguientes términos:

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, EN EL ESTADO DE MORELOS (PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES)

(...)

34.2. PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del Informe de la precampaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado son las siguientes:

(...)

c) 4 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones: 2-C3-P1, **2-C4-P1 (Se deja sin efectos en términos de la sentencia SUP-RAP-275/2018)**, 2-C7-P1 y 2-C34-P2.

d) 5 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones: **2_C9_P1**, 2_C31_P2, 2_C32_P2, 2_C33_P2 y 2_C38_P2.

e) 3 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones: **2_C11_P1**, **2_C14_P2** y **2_C28_P2**

(...)

c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias infractoras del artículo 127 del Reglamento de Fiscalización: **conclusiones 2-C3-P1, 2-C4-P1, 2-C7-P1 y 2-C34-P2.**

En este sentido, es importante mencionar que en la sentencia que por esta vía se acata, respecto a la conclusión **2-C4-P1**, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió revocar lisa y llana la conclusión de mérito, al advertirse que el Partido Revolucionario Institucional presentó la documentación que le fue requerida por parte de la autoridad fiscalizadora.

Derivado de lo anterior, dicha conclusión queda sin efectos.

(...)

d) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras de los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización: **Conclusiones: 2_C9_P1, 2_C31_P2, 2_C32_P2, 2_C33_P2 y 2_C38_P2.**

No.	Conclusión	Monto involucrado
2_C9_P1	<i>“El sujeto obligado omitió reportar en el SIF, los egresos generados por concepto de espectaculares y propaganda colocada en la vía pública, por un monto de \$22,793.16 (Se modifica en cumplimiento a lo ordenado en el SUP-RAP-275/2018)</i>	\$22,793.16
2_C31_P2	“(...)”	“(...)”
2_C32_P2	“(...)”	“(...)”
2_C33_P2	“(...)”	“(...)”
2_C38_P2	“(...)”	“(...)”

Visto lo anterior, a continuación, se presentan las conclusiones finales sancionatorias determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado.

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de mérito, se hicieron del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar las observaciones realizadas.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los candidatos involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña materia de estudio, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6 del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de sus candidatos las observaciones que se detallan en el oficio referido en el análisis de la conclusión. Esto, a efecto que los candidatos presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido político, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de las conductas materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes siguientes:

- 1) Informes del gasto ordinario:
 - a) Informes trimestrales.
 - b) Informe anual.
 - c) Informes mensuales.
- 2) Informes de Proceso Electoral:
 - a) Informes de precampaña.
 - b) Informes de obtención de apoyo ciudadano.
 - c) Informes de campaña.**
- 3) Informes presupuestales:
 - a) Programa Anual de Trabajo.
 - b) Informe de Avance Físico-Financiero.
 - c) Informe de Situación Presupuestal.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es*

responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior.”

De lo anterior se desprende, que no obstante que el sujeto obligado haya incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.

Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y

en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación²:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.-

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

² Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del partido no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante las conductas observadas, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de las conductas infractoras de mérito, al partido político pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las que es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado las diversas conductas que violentan los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra los mismos bienes jurídicos tutelados; por cuestión de método, para facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la

individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten.

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a) Valor protegido o trascendencia de la norma.
- b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto.
- c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.
- d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
- e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
- f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.
- g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
- h) La capacidad económica del sujeto infractor.

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

En relación con las irregularidades identificadas en las **conclusiones 2_C9_P1, 2_C31_P2, 2_C32_P2, 2_C33_P2, y 2_C38_P2** del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar sus egresos por concepto de espectaculares, propaganda colocada en la vía pública, propaganda, propaganda utilitaria, operativos, spots de radio y pago de representantes de casilla realizados durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Morelos.

En el caso a estudio, las faltas corresponden a una omisión del sujeto obligado consistente en omitir reportar gastos realizados, durante la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la entidad referida, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.³

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que ampara los gastos realizados, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refieren las irregularidades observadas:

2_C9_P1 <i>El sujeto obligado omitió reportar en el SIF, los egresos generados por concepto de espectaculares y propaganda colocada en la vía pública, por un monto de \$22,793.16. (Se modifica en cumplimiento a lo ordenado en el SUP-RAP-275/2018)</i>
2_C31_P2 ...”
2_C32_P2 “...”
2_C33_P2 “...”
2_C38_P2 “..”

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Morelos, concretándose en dicha entidad

³ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el resultado de la comisión de las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

Previo al análisis de la norma transgredida es relevante señalar que los monitoreos de medios constituyen un mecanismo previsto en los Reglamentos aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que le permiten a la autoridad fiscalizadora verificar la veracidad de la información proporcionada por los partidos políticos y coaliciones en sus informes; ya que se trata de un conjunto de actividades diseñadas para medir, analizar y procesar en forma continua, la información emitida por medios de comunicación electrónicos, impresos o alternos, respecto de un tema, lugar y tiempo determinados, con el registro y representación objetiva de los promocionales, anuncios, programas, entre otros, objeto del monitoreo; según señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-43/2006.

De igual manera, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en el SUP-RAP-86/2007 ha definido al monitoreo en materia de fiscalización como “como una herramienta idónea para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y fiscalización de las actividades de los partidos políticos, encomendadas a las autoridades electorales, ya que a través de éstos se tiende a garantizar la equidad en la difusión de los actos proselitistas de los partidos políticos; medir los gastos de inversión en medios de comunicación de dichas entidades de interés público y apoyar la fiscalización de los institutos políticos para prevenir que se rebasen los topes de campaña, entre otros aspectos”.

Bajo esta línea, surgió el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos como un instrumento de medición que permite a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, a través de las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales, recabar información y documentación soporte sobre inserciones en prensa y anuncios espectaculares colocados en la vía pública con la finalidad de cotejarlo con lo reportado por los partidos políticos y coaliciones en sus Informes de Campaña, con el fin de verificar que todos los gastos realizados hayan

sido debidamente registrados en su contabilidad y reportados en los Informes correspondientes.

Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar la realización de monitoreos, se encuentra regulada en el artículo 318 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra señala:

“Artículo 318.

Monitoreo en diarios, revistas y otros medios impresos

- 1. La Comisión, a través de la Unidad Técnica, realizará las gestiones necesarias para llevar a cabo monitoreo en diarios, revistas y otros medios impresos tendentes a obtener el voto o promover a los precandidatos, candidatos y candidatos independientes a cargo de elección popular.*
- 2. Los resultados obtenidos en el monitoreo serán conciliados con lo reportado por los partidos, coaliciones y candidatos y aspirantes en los informes de ingresos y gastos aplicados a las precampañas y campañas.*
- 3. La Comisión a propuesta de la Unidad Técnica, establecerá la metodología para el monitoreo en diarios, revistas y otros medios impresos que promuevan a precandidatos y candidatos de los partidos políticos y coaliciones, así como de los candidatos independientes durante los Procesos Electorales.*
- 4. El monitoreo consistirá en reunir, clasificar y revisar la propaganda que se publique en medios impresos locales y de circulación nacional tendentes a obtener o promover a precandidatos o candidatos y candidatos independientes o bien promocionar genéricamente a un partido político y/o coalición durante el Proceso Electoral.*
- 5. El costo de la propaganda de medios impresos no reportados por los partidos políticos; coaliciones, candidatos y aspirantes, se determinará conforme a lo establecido en el Artículo 27 del presente Reglamento.*
- 6. El monto de la propaganda no reportada o conciliada por los partidos políticos y aspirantes se acumulará a los gastos de precampaña de la elección de que se trate.*
- 7. El monto de la propaganda no reportada o no reconocida por los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, durante los procesos electorales se acumulará a los gastos de campaña de la elección de que se trate y de ser el caso, se prorrateará en los términos que establece el Reglamento.*
- 8. El periodo de monitoreo de medios impresos para precampaña dará inicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226 de la Ley de Instituciones, y para campaña local, deberá ser determinado conforme a los acuerdos que para tal efecto apruebe el Consejo General.*

9. El periodo de monitoreo de medios impresos para campaña dará inicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley de Instituciones.

10. La Comisión podrá solicitar el apoyo de la Coordinación Nacional de Comunicación Social (CNCS) y de la estructura desconcentrada del Instituto con el objeto de hacerse llegar de elementos de prueba suficientes a través del monitoreo de la publicidad en diarios, revistas y otros medios impresos durante las precampañas y campañas.

11. La Unidad Técnica realizará conciliaciones semanales de las muestras o testigos incorporadas en el sistema en línea de contabilidad, contra lo detectado en el monitoreo y pondrá a disposición del partido, coalición o candidato independiente los resultados.”

Como puede apreciarse, el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos contribuye a la construcción de condiciones de credibilidad y confianza, al incorporar medidas novedosas para fiscalizar eficientemente el manejo administrativo y financiero de las campañas políticas; ya que permite a la Unidad de Fiscalización cruzar la información a través de la detección de anuncios espectaculares colocados en la vía pública y de la búsqueda de información en medios impresos de circulación nacional y local, respecto de toda aquella publicidad y propaganda para cotejarlos con lo reportado por los partidos y coaliciones bajo este rubro; por lo que se configura como un mecanismo que permite cumplir cabalmente con el procedimiento de auditoría y verificar la aplicación de recursos para detectar oportunamente una posible omisión de gastos.

Ahora bien, dada la naturaleza y finalidad de los monitoreos, es inconcuso que este sistema constituye una herramienta indispensable para verificar el cumplimiento de las normas en materia de financiamiento, lo cual pone en evidencia que se trata de instrumentos fiables y dotados de valor probatorio para determinar las posibles infracciones cometidas a la normatividad electoral, por ser esa precisamente la función para la cual fueron diseñados en la legislación.

En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. De esta forma, si bien el la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su artículo 462, numeral 2 que sólo las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, mientras que las pruebas técnicas harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente; la Sala Superior ha señalado que cuando se trata de imágenes, es casi

imposible hacerlas constar en un documento, pues para describirlas de manera exacta es necesario utilizar una gran cantidad palabras, lo cual haría casi imposible el intento de consignar en un documento el resultado de un monitoreo que comprenda varios elementos registrados.

Por tanto, en casos como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga costar los resultados en medios electrónicos para considerarlos como pruebas con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos realizados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Entenderlo de distinta manera, se traduciría en una actividad inocua, en tanto que los monitoreos carecerían de razón; según se enfatiza en el SUP-RAP 133/2012 en donde se asigna pleno valor probatorio a los Monitoreos realizados por el Instituto Federal Electoral en ejercicio de sus atribuciones.

Es preciso mencionar que la ratio essendis de este criterio se encuentra recogido en la Jurisprudencia 24/2010, aprobada por la Sala Superior en la sesión pública celebrada el cuatro de agosto de dos mil diez; misma que señala que:

“...los testigos de grabación, producidos por el Instituto Federal Electoral, constituyen pruebas técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno, porque son obtenidos por el propio Instituto, al realizar el monitoreo, para verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión de promocionales en radio y televisión.”

Por lo anterior, se colige que los resultados del monitoreo que dieron origen a la presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública en ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no obra en la revisión de los informes de campaña prueba alguna en contrario que sirva para desvirtuar los resultados del monitoreo, como podría ser otro documento elaborado por la propia autoridad, cuyo contenido diverja del informe, según se establece en el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-117/2010.

Previo a la trascendencia de la norma transgredida, es relevante señalar que las visitas de verificación constituyen un mecanismo previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el Reglamento de Fiscalización, que le permite a la autoridad fiscalizadora verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad vigente respecto a la veracidad de lo reportado en los Informes de los Ingresos y Gastos que realicen los partidos

políticos en el periodo de campaña; pues se trata de una herramienta diseñada para contrastar y corroborar la información recabada por el personal designado por la Unidad de Fiscalización, para la realización de las verificaciones, con lo reportado por los institutos políticos.

De igual manera, las visitas de verificación son una actividad eficaz de la autoridad fiscalizadora para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y vigilancia respecto de los informes de Campaña que presenten los institutos políticos, a efecto de cotejar que todos los gastos realizados hayan sido debidamente registrados en su contabilidad y reportados en los Informes correspondientes, garantizando así la certeza y transparencia en el origen de los recursos.

Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar las visitas de verificación, se encuentra regulada en los artículos 297 y 298 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra señalan:

“Artículo 297.

Objetivo de las visitas

1. La Comisión podrá ordenar visitas de verificación con el fin de corroborar el cumplimiento de las obligaciones y la veracidad de los informes anual, de precampaña y campaña presentados por los partidos políticos, aspirantes y candidatos.

Artículo 298.

Concepto

1. La visita de verificación es la diligencia de carácter administrativo que ordena la Comisión, tiene por objeto corroborar el cumplimiento de las obligaciones y la veracidad de los informes presentados por los partidos políticos, aspirantes y candidatos independientes.”

Como se advierte de la lectura al precepto transcrito, las visitas de verificación permiten a la Unidad de Fiscalización dar cumplimiento a la función encomendada como órgano encargado del control y vigilancia de las finanzas de los partidos políticos y coaliciones. Permite tener mayor certeza respecto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de financiamiento y gasto. Dicha facultad admite allegarse de información que pueda ser cotejada con la reportada por los partidos y coaliciones, contando así con un parámetro que pueda ser contrastado y genere una verificación integral y eficaz.

En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un

documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel.

Por tanto, en el caso como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga constar en actas de verificación los resultados de las visitas para considerarlos como pruebas con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos realizados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, por lo que entenderlo de distinta manera se traduciría en una actividad inocua perdiendo la razón de ser de dichos instrumentos.

Aunado a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de la Comisión de Fiscalización CF/004/2016, por el que se emiten, entre otros, los Lineamientos para realizar las visitas de verificación, durante las precampañas y campañas del Proceso Electoral 2015-2016, en el artículo 8, fracción IV, inciso a), mismo que para mayor referencia se transcribe a continuación:

“a) La visita de verificación podrá ampliarse a otro domicilio en el que se conozca que se realizan actividades relacionadas con el sujeto verificado o donde exista material de propaganda electoral alusiva a la obtención del apoyo ciudadano o precampaña, así como con el candidato y candidatos independientes, siempre que durante el desarrollo de la visita de verificación se desprendan elementos objetivos, veraces y fidedignos, que hagan presumible la existencia de documentación o propaganda electoral en un domicilio diverso al señalado en la orden primigenia.”

Por lo anterior, se colige que los resultados de las visitas de verificación que dieron origen a la presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública en ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no obra en la revisión de los informes de campaña prueba alguna en contrario que sirva para desvirtuar los resultados de las actas de verificación, como podría ser otro documento elaborado por la propia autoridad, cuyo contenido diverja del informe presentado.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos

obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse diversas faltas sustanciales consistentes en no reportar los gastos realizados durante el periodo de campaña, mismo que carecen de objeto partidista, se vulneran sustancialmente los principios de transparencia y de certeza en el origen de los recursos.

Así las cosas, las faltas sustanciales que traen consigo la no rendición de cuentas, impiden garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito violó los valores sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que, en el campo de la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia electoral.

Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.

Ahora bien el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente⁴:

- a)** Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio.
- b)** Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.

⁴ Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016

- c)** Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
- d)** Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación y sus componentes deberán ser comparables.
- e)** Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y comparable.

Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, valorará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.

Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.

En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación comprobatoria.

El sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos⁵ y 127 del Reglamento de Fiscalización⁶, mismos que a la letra señalan:

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad

⁵ Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes: b) Informes de Campaña: Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; (...)"

⁶ "Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad."

fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las hipótesis normativa prevista en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos mediante la verificación oportuna, al contar con la documentación soporte de las cuentas por pagar con saldos a la conclusión de la campaña.

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al sujeto obligado se traducen en **faltas** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que las infracciones deben calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando VEINTIUNO de la Resolución INE/CG1135/2018, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

Conclusión 2 C9 P1

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.

- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$22,793.16 (veintidós mil setecientos noventa y tres pesos 16/100 M.N.)**.
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁷

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracciones I y II del ordenamiento en cita, no son aptas para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor, una amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente (ahora Unidades de Medida y Actualización), serían poco idóneas para disuadir las conductas infractoras como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

⁷ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al ente político es de índole económica equivalente al **100%** (cien por ciento), cantidad que asciende a un total de **\$22,793.16 (veintidós mil setecientos noventa y tres pesos 16/100 M.N.)**.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Revolucionario Institucional es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25%** (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$22,793.16 (veintidós mil setecientos noventa y tres pesos 16/100 M.N.)**.

(...)

e) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias infractoras del artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

No.	Conclusión	Monto involucrado
2_C11_P1	<i>"El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, de 10 operaciones, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$888,909.45" (Se modifica, en cumplimiento a lo ordenado en el SUP-RAP-275/2018</i>	\$888,909.45
(...)	(...)	(...)
(...)	(...)	(...)

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en la observación de mérito, misma que se hizo del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente de dicha notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes;

así como la documentación que subsanara la irregularidad detectada; sin embargo, la respuesta no fue presentada para subsanar la observación realizada.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los candidatos involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña materia de estudio en la entidad correspondiente, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6, del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de sus candidatos las observaciones que se detallan en el oficio referido en el análisis de las conclusiones. Esto, a efecto que los candidatos presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido político, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia y que los candidatos contaran con la oportunidad de preparar una adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de las conductas materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos*

los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”

Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS”, capítulo III “*DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS*” de la legislación en comento, con relación al Libro Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes siguientes:

- 1) Informes del gasto ordinario:
 - a) Informes trimestrales.
 - b) Informe anual.
 - c) Informes mensuales.
- 2) Informes de Proceso Electoral:
 - a) Informes de precampaña.
 - b) Informes de obtención de apoyo ciudadano.
 - c) Informes de campaña.**
- 3) Informes presupuestales:
 - a) Programa Anual de Trabajo.
 - b) Informe de Avance Físico-Financiero.
 - c) Informe de Situación Presupuestal.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “*el candidato es responsable solidario solidarios del cumplimiento de los informes gastos que se refieren en el inciso anterior, y*”.

De lo anterior se desprende que no obstante que el sujeto obligado haya omitido realizar registros contables en tiempo real, no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.

- Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda interna.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de las conductas materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea el partido político y/o el candidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan⁸.

En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

⁸ Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización, establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efecto de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en

los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual

resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación⁹:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

⁹ Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Consecuentemente, respecto a las conductas sujetas a análisis, las respuestas del sujeto obligado no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendientes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante las conductas observadas, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de las conductas infractoras de mérito al partido político pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que violentan el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra el mismo bien jurídico tutelado; por cuestión de método y para facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a)** Tipo de infracción (acción u omisión)
- b)** Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c)** Comisión intencional o culposa de la falta.
- d)** La trascendencia de las normas transgredidas.

- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando VEINTIUNO de la Resolución INE/CG1135/2018.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.

Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones 2_C11_P1, 2_C14_P2 y 2_C28_P2 del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Morelos.

En el caso a estudio, las faltas corresponden a diversas **omisiones** consistentes en incumplir con su obligación de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.¹⁰

¹⁰ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Morelos, por lo que vulneró lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

<i>“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, de 10 operaciones, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$888,909.45” (Se modifica, en cumplimiento a lo ordenado en el SUP-RAP-275/2018)</i>
(...)
(...)

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Morelos, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el resultado de la comisión de las faltas referidas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de violación alguna del citado ente político, para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse faltas sustanciales por omitir realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo

real, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad y la certeza en la rendición de cuentas.

Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito traen consigo la no rendición de cuentas, impiden garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En las conclusiones que se analizan, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización¹¹.

Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir realizar el registro de operaciones contables en tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad fiscalizadora electoral.

La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

¹¹ "Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente reglamento (...) 5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto."

En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la norma, lo cual vulneraría el Estado de Derecho.

De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización.

Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un sujeto obligado no registre a tiempo los movimientos de los recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebató a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que fiscaliza.

Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que correspondan.

Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como una falta sustantiva, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea.

En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus

atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y paradigmas del sistema previsto en la legislación.

Así las cosas, ha quedado acreditado que, al realizar registros contables en forma extemporánea, es decir, al omitir realizar los registros contables en tiempo real, el sujeto obligado vulnera la hipótesis normativa prevista en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta señalada, es la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, a través del registro en tiempo real realizado por el sujeto obligado en el manejo de sus recursos.

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al sujeto obligado se traducen en **diversas faltas** de resultado que ocasionan un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que las infracciones en cuestión generan una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los sujetos obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en una misma conducta y por tanto, en una misma falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado de legalidad certeza en la rendición de cuentas.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de las conductas a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que las infracciones deben calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con

motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando VEINTIUNO de la Resolución INE/CG1135/2018, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

Conclusión 2 C11 P1

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus operaciones en tiempo real, durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en omitir realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Morelos, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.

- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$888,909.45 (ochocientos ochenta y ocho mil novecientos nueve pesos 45/100 M.N.).**
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹²

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracciones I y II del ordenamiento en cita, no son aptas para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor, una amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente (ahora Unidades de Medida y Actualización), serían poco idóneas para disuadir las conductas infractoras como la que en este caso nos ocupa para

¹² Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al ente político es de índole económica equivalente al 5% (cinco por ciento) sobre el monto total de las operaciones registradas fuera de tiempo real, que en la especie asciende a un total de **\$44,445.47 (cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 47/100 M.N.)**

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Revolucionario Institucional es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25%** (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$44,445.47 (cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 47/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

(...)

8. Las sanciones impuestas al Partido Revolucionario Institucional en el estado de Morelos impuesta en la resolución **INE/CG1135/2018**, particularmente por lo que toca a las conclusiones 2_C4_P1, 2_C9_P1 y 2_C11_P1 quedan de la siguiente manera:

Sanciones en resolución INE/CG1115/2018	Modificación	Sanciones en Acatamiento a ST-RAP-61/2018
SEGUNDO Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 34.2 de la presente Resolución, se imponen al Partido Revolucionario Institucional , las sanciones siguientes: (...)		SEGUNDO Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 34.2 de la presente Resolución, se imponen al Partido Revolucionario Institucional , las sanciones siguientes: (...)

Sanciones en resolución INE/CG1115/2018	Modificación	Sanciones en Acatamiento a ST-RAP-61/2018
<p>c) 4 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 2-C3-P1, 2-C4-P1, 2-C7-P1 y 2-C34-P2.</p> <p>(...)</p> <p>Conclusión 2-C4-P1 Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$164,720.00 (ciento sesenta y cuatro mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.).</p> <p>d) 5 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones: 2_C9_P1, 2_C31_P2, 2_C32_P2, 2_C33_P2 y 2_C38_P2.</p> <p>Conclusión 2_C9_P1 Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$52,700.24 (cincuenta y dos mil setecientos pesos 24/100 M.N.).</p> <p>(...)</p> <p>e) 3 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones: 2_C11_P1, 2_C14_P2 y 2_C28_P2.</p> <p>Conclusión 2_C11_P1 Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$46,042.72</p>		<p>c) 4 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones: 2-C3-P1, 2-C4-P1 (Se deja sin efectos en términos de la sentencia SUP-RAP-275/2018), 2-C7-P1 y 2-C34-P2.</p> <p>Conclusión 2-C4-P1:</p> <p>En cumplimiento a lo ordenado en el SUP-RAP-275/2018 se deja sin efectos la sanción impuesta.</p> <p>d) 5 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones: 2_C9_P1, 2_C31_P2, 2_C32_P2, 2_C33_P2 y 2_C38_P2.</p> <p>Conclusión 2_C9_P1:</p> <p>Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$22,793.16 (veintidós mil setecientos noventa y tres pesos 16/100 M.N.). En cumplimiento a lo ordenado en el SUP-RAP-275/2018</p> <p>e) 3 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones: 2_C11_P1, 2_C14_P2 y 2_C28_P2</p> <p>Conclusión 2_C11_P1</p> <p>Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$44,445.47 (cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 47/100 M.N.) En cumplimiento a lo ordenado en el SUP-RAP-275/2018</p> <p>(...)</p>

Sanciones en resolución INE/CG1115/2018	Modificación	Sanciones en Acatamiento a ST-RAP-61/2018
(cuarenta y seis mil cuarenta y dos pesos 72/100 M.N.) (...)		

9. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el presente Acuerdo, se modifican los incisos c), d) y e) del Resolutivo **QUINTO** de la resolución **INE/CG1135/2018**, para quedar en los siguientes términos:

SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando **34.2** de la presente Resolución, se imponen a la **Partido Revolucionario Institucional**, las sanciones siguientes:

(...)

c) 4 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones: 2-C3-P1, 2-C4-P1 (**Se deja sin efectos en términos de la sentencia SUP-RAP-275/2018**), 2-C7-P1 y 2-C34-P2.

Conclusión 2-C4-P1:

En cumplimiento a lo ordenado en el SUP-RAP-275/2018 se deja sin efectos la sanción impuesta.

d) 5 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones: 2_C9_P1, 2_C31_P2, 2_C32_P2, 2_C33_P2 y 2_C38_P2.

Conclusión 2 C9 P1:

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$22,793.16 (veintidós mil setecientos noventa y tres pesos 16/100 M.N.)**. **En cumplimiento a lo ordenado en el SUP-RAP-275/2018**

e) 3 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones: 2_C11_P1, 2_C14_P2 y 2_C28_P2

Conclusión 2 C11 P1

Una reducción del **25%** (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$44,445.47 (cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 47/100 M.N.)** En cumplimiento a lo ordenado en el **SUP-RAP-275/2018**

(...)

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

A C U E R D A

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen INE/CG1134 y la resolución **INE/CG1135/2018**, aprobada en sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, en los términos precisados en el Considerando **5 a 9** del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Infórmese a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SUP-RAP-275/2018**, remitiéndole para ello las constancias atinentes.

TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales haga del conocimiento del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana el presente Acuerdo, a efecto de que se proceda al cobro de las sanciones impuestas, en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme, de conformidad con lo establecido en los considerandos siete y nueve del presente Acuerdo con relación a la Resolución **INE/CG1135/2018**.

CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1279/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, CON SEDE EN XALAPA, VERACRUZ, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO SX-RAP-76/2018

A N T E C E D E N T E S

I. Aprobación de Dictamen Consolidado y Resolución. El seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (en delante de este Instituto), aprobó en sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado y la Resolución **INE/CG1152/2018** e **INE/CG1153/2018**, respectivamente, que presentó la Comisión de Fiscalización del propio Instituto, respecto de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputado Local y Ayuntamientos correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Tabasco.

II. Recurso de apelación. Inconforme con las determinaciones referidas en el antecedente anterior, el quince de agosto de dos mil dieciocho, el Representante Propietario de MORENA ante el Consejo General de este Instituto, interpuso recurso de apelación ante la autoridad responsable, el cual fue remitido a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el diecinueve de agosto de los corrientes, y se ordenó integrar el expediente **SUP-RAP328/2018**.

El veintitrés siguiente, mediante Acuerdo de escisión la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó la escisión de la demanda, para que, por cuanto hace a los planteamientos vinculados con las elecciones de Diputaciones Locales e integrantes de Ayuntamientos, en el citado Proceso Electoral, la Sala Regional Xalapa resolviera lo conducente

III. Acuerdo de admisión. Al día siguiente, se recibieron en la Oficialía de Partes de dicha Sala Regional, las constancias relacionadas con el asunto de mérito y el veinticinco posterior, la Sala Regional Xalapa, ordenó integrar el expediente

SX-RAP-76/2018 para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

IV. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Xalapa, en sesión pública celebrada el seis de septiembre de dos mil dieciocho, resolvió el recurso referido, en los siguientes términos:

“R E S U E L V E”

PRIMERO. Se **modifica** la resolución **INE/CG1153/2018**, en lo que fue materia de impugnación, para los efectos precisados en el Considerando Quinto de esta sentencia.

(...)”

V. Toda vez que en la ejecutoria se ordenó a este Consejo General emitir una nueva determinación para lo cual la autoridad responsable deberá fundar y motivar la sanción que corresponde a la conclusión **5_C_34_P2** dentro de la Resolución INE/CG1153/2016. Así, de conformidad al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables, por lo que con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al, en consecuencia, la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de mérito.

C O N S I D E R A N D O

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso

Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Tabasco, presentados por MORENA,.

2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso del Recurso de Apelación identificado como **SX-RAP-76/2018**.

3. Que el seis de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió **modificar** la Resolución **INE/CG1153/2018**, en lo relativo a la conclusión **5_C34_P2**, correspondiente al Considerando 38.5, inciso e) y su respectiva sanción impuesta en el resolutivo Quinto, a efecto que esta autoridad funde y motive la sanción que en derecho corresponda a la institución política referida, por la omisión de realizar el registro contable de 66 operaciones en tiempo real, excediendo los 3 días posteriores en que se realizó la operación, dentro del **periodo de ajuste**, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Tabasco para la elección de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos.

4. Que, por lo anterior y en razón del Considerando “**CUARTO. Estudio de fondo**”, de la sentencia **SX-RAP-76/2018**, la Sala Regional Xalapa, determinó **fundados** los agravios hechos valer por el apelante como a continuación se transcribe:

“(…)

CUARTO. Estudio de fondo.

(…)

Determinación de esta Sala Regional.

Falta de fundamentación y motivación en la sanción impuesta en la conclusión 5_C34_P2.

(…)

122. Con relación a esta conclusión, el actor sostiene que lo procedente era aplicar una sanción equivalente a un 5% (cinco por ciento) sobre el monto involucrado, pues en esta infracción se está en presencia de las mismas omisiones que se actualizaron en las diversas conclusiones 5_C11_P1, 5_C16_P2, 5_C27_P2 y 5_C32_P2.

(…)

125. Esta Sala Regional considera que el agravio es fundado y suficiente para revocar la conclusión y su respectiva sanción controvertida en este apartado, por las razones siguientes.

126. Lo anterior, se afirma así porque no es jurídicamente admisible que idéntica motivación se haya proporcionado al imponer una multa del treinta por ciento que del cinco por ciento, cuando es de explorado derecho que siempre que se impone una superior a la mínima debe fundarse y motivarse tal decisión para no dejar en estado de indefensión al sujeto obligado, ya que si no se conocen las razones que condujeron a la autoridad responsable a imponer una multa superior a la mínima contemplada en la Ley, no se encontrará en condiciones de combatirla adecuadamente.

127. En efecto, en la resolución controvertida, se advierte que el INE como para individualizar la sanción realizó el análisis de los siguientes elementos.

- a) Tipo de infracción (acción u omisión)
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión

128. En los que expuso los mismos argumentos para las cinco conclusiones que analizó.

(...)

131. Como se advierte, le asiste la razón al actor, pues efectivamente, la autoridad responsable no expuso una consideración diferente para imponer una sanción mayor.

132. Entonces, si tal como lo señala el apelante, de la resolución combatida se advierte que la autoridad responsable dio idénticas razones para imponer la multa del cinco por ciento en las conclusiones 5_C11_P1, 5_C16_P1, 5_C27_P2 y C_32_P2, que para imponer la de treinta por ciento en la

conclusión que se analiza, es inconcuso que la imposición de la sanción más alta, carece de la debida motivación, ya que no se expusieron razones diferentes a las utilizadas para sancionar una misma conducta con un monto mayor.

133. Como consecuencia de lo anterior, lo procedente es revocar la conclusión y su respectiva sanción controvertida en este apartado, a efecto de que la autoridad responsable funde y motive la sanción que en derecho corresponda, tomando en consideración lo aquí expuesto.

5. Que, en coherencia al análisis desarrollado por el órgano jurisdiccional, antes expuesto, dentro de la sentencia emitida en el expediente SX-RAP-76/2018 en el apartado relativo a los efectos de la sentencia, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó lo siguiente:

“(…)

QUINTO. Efectos.

- I. Al haber resultado **fundado** el agravio hecho valer en contra de la conclusión **5_C34_P2** y su correspondiente sanción, lo procedente es **modificar** la resolución **INE/CG1153/2018**, emitida por la autoridad responsable, únicamente, para el efecto de que funde y motive la sanción que en derecho corresponda, tomando en consideración lo aquí expuesto.*
- II. En consecuencia, se **ordena** al Consejo General del INE que emita una diversa resolución, tomando en consideración lo expuesto en la parte considerativa de esta ejecutoria.*
- III. Por lo anterior, se **vincula** para que informe a esta Sala Regional del cumplimiento dado a la presente ejecutoria, una vez que ello ocurra, dentro de las veinticuatro horas siguientes, debiendo adjuntar las constancias que acreditan el cumplimiento dado a lo aquí ordenado.*
- IV. Lo anterior, con fundamento en el artículo 92 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.*

- V. *Asimismo, se deberá informar a la Sala Superior de este Tribunal Electoral, la presente determinación, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo plenario de escisión correspondiente al recurso de apelación SUP-RAP 328/2018.*
- VI. *Por último, deberán permanecer intocadas las demás conclusiones que fueron materia de impugnación, ya que, el INE sancionó de manera proporcional las irregularidades acreditadas, y analizó todos los elementos de las individualizaciones de mérito.*
- (...)"

6. Que en tanto la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación materia de acatamiento dejó intocadas las demás consideraciones que sustentan la Resolución identificada como **INE/CG1153/2018**, este Consejo General únicamente se aboca al estudio y análisis relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en la conclusión **5_C34_P2** de la Resolución impugnada, en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Regional, materia del presente Acuerdo.

7. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional por la cual revocó, en lo que fue materia de impugnación, específicamente la parte correspondiente a la conclusión **5_C34_P2** de la Resolución impugnada, relativa a la omisión de realizar el registro contable de 66 operaciones en tiempo real, excediendo los 3 días posteriores en que se realizó la operación, dentro del periodo de ajuste, por parte del partido MORENA, en relación con la elección de Gobernador, Diputado Local y Ayuntamientos, dentro del marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Tabasco, para efecto de fundar y motivar la sanción que en derecho corresponda, esta autoridad electoral valoró y examinó los planteamientos formulados por el apelante en el recurso de mérito, específicamente en lo señalado en el expediente identificado como SX-RAP-76/2018.

En consecuencia, se procedió a acatar la sentencia referida, para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la sentencia:

Sentencia	Efectos	Acatamiento
Se modifica la resolución INE/CG1153/2018 , en lo que fue materia de impugnación, para los efectos precisados en el Considerando Quinto de esta sentencia. Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que emita una nueva resolución, tomando en cuenta lo expuesto en la parte considerativa de esta ejecutoria.	Se modifica la Resolución INE/CG1153/2018 , emitida por la autoridad responsable, únicamente para el efecto de que funde y motive la sanción que en derecho corresponda en cuanto hace a la conclusión 5_C34_P2 y la sanción impuesta, tomando en consideración lo expuesto en la parte considerativa.	En cumplimiento a lo ordenado por el órgano jurisdiccional, esta autoridad se abocó a fundar y motivar la determinación establecida en la conclusión 5_C34_P2 . En ese sentido, por lo que hace a las observaciones emitidas en la conclusión 5_C34_P2 , se detectó la que el registro contable de las 66 (sesenta y seis operaciones) fueron registradas después de la garantía de audiencia , por lo que el criterio de sanción que prevalece es el del 30% (treinta por ciento) sobre el monto involucrado.

Derivado del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa, este Consejo General procede al análisis de la motivación y fundamentación de las sanciones impuestas a las conductas englobadas en el **inciso e)** del Considerando **38.5 MORENA**, del **Acuerdo INE/CG1153/2018**, específicamente respecto de la conclusión **5_C34_P2**, que en su parte conducente queda de la manera siguiente:

“(…)

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

(…)

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA

(…)

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que respecta a los registros de operaciones realizados en el periodo de correcciones en respuesta al oficio de errores y omisiones, se debe analizar a la luz de las particularidades del sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los sujetos obligados, creado a partir de la reforma del año 2014, pues dicho sistema atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización

integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

En el caso concreto, la obligación de los sujetos obligados consiste en registrar las operaciones en la temporalidad que señala la normatividad, esto es, dentro de los plazos que la propia norma establece.

No obstante lo anterior, una vez analizado todos y cada uno de los registros realizados en el Sistema Integral de Fiscalización, esta autoridad obtuvo certeza respecto a que las operaciones materia del presente apartado no fueron registrados en el periodo respectivo, siendo que dicho sistema es la herramienta informática que hace prueba plena para la autoridad de lo ahí registrado y de la documentación exhibida por los sujetos obligados.

Ahora bien, derivado de la naturaleza de la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos efectuados durante la campaña, en la temporalidad señalada, la omisión en el cumplimiento per se no es una falta subsanable, pues en el mismo momento en que el sujeto obligado no realiza el debido registro dentro de los plazos específicos y a través del medio que establece la normativa electoral, queda configurada la infracción.

Al respecto resulta dable destacar que el sistema normativo electoral regula los distintos procedimientos electorales bajo un sistema de etapas y plazos a fin de que los actores políticos cuenten con una mayor seguridad jurídica respecto de la actuación de la autoridad y de su propia actividad política; es por ello que el reporte de los ingresos y gastos en el tiempo establecido para ello resulta esencial para dotar de mayor certeza el desarrollo de los procesos electorales.

Permitir que los sujetos registren operaciones en cualquier momento, vulnerando lo anterior, rompería el modelo de fiscalización al poner en riesgo el ejercicio de las facultades de la autoridad relativas al análisis y valoración de la totalidad de la información presentada por dichos sujetos con proximidad a la aprobación de los dictámenes y resoluciones, es por ello que los plazos referidos son de aplicación estricta en cada una de sus etapas, desde la presentación de los informes, hasta la notificación del oficio de errores y omisiones, así como de la respuesta recaída al

mismo, con lo que se garantiza a los sujetos obligados la debida audiencia.

Para tal efecto, la Ley General de Partidos Políticos dispone en su artículo 80 las etapas involucradas en la fiscalización de las campañas, en aras de tutelar la integralidad que debe regir en todo el Proceso Electoral y de la revisión de los ingresos y gastos involucrados.

Al respecto, en el procedimiento de fiscalización de campañas se tutela la garantía de audiencia de los sujetos obligados mediante la notificación del oficio de errores y omisiones, siendo la respuesta que formulen al mismo el momento procesal oportuno para realizar las manifestaciones que consideren pertinentes y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador.

En apego a lo expuesto, en el marco de la revisión de los Informes de campaña, la autoridad fiscalizadora otorgó la garantía de audiencia al sujeto obligado, derivado de lo cual, en respuesta al oficio de errores y omisiones el partido reportó diversos ingresos y gastos.

No obstante lo anterior, del análisis a los ingresos y gastos reportados en respuesta ha dicho oficio de errores y omisiones, la autoridad fiscalizadora llegó a la conclusión que el registro de dichas operaciones se había realizado de manera extemporánea, esto es, fuera de los plazos que establece el artículo 38 del Reglamento de Fiscalización.

Derivado de ello, es de destacarse que la garantía de audiencia debe ser entendida como la posibilidad de que el sujeto regulado presente ante esta autoridad argumentos y documentación que acrediten que cumplió en tiempo y forma con sus obligaciones en materia de fiscalización y no como una exención a ello, pues esto atentaría con la aplicación efectiva de las normas.

Permitir a los sujetos regulados registrar en cualquier momento las operaciones relativas a sus ingresos y gastos, so pretexto de realizar dichos registros en respuesta al oficio de errores y omisiones girado por la autoridad fiscalizadora, desincentivaría a los sujetos obligados el cumplir en tiempo sus obligaciones.

No obstante lo anterior, y tal como ha quedado previamente detallado, la omisión de registrar las operaciones en tiempo real, es una falta que por su propia naturaleza no es subsanable.

Al respecto, resulta aplicable por analogía, el criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica

SX-RAP-7- 2016, mediante el cual determinó que el rebase del tope de gastos de campaña es la conclusión a la que llega el ente fiscalizador después de analizar el Informe respectivo, dado que a partir de la información que le es proporcionada por los sujetos obligados y el ejercicio de sus facultades de fiscalización, la autoridad se encuentra en posibilidad de establecer si aconteció algún rebase a los topes de gastos establecidos y, en su caso, el monto respectivo; motivo por el cual no es una observación que se formule en el oficio de errores y omisiones previsto en el artículo 80 numeral 1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley General de Partidos Políticos.

Lo anterior toda vez que, conforme a lo expuesto, fue precisamente de la documentación y registros realizados en el Sistema Integral de Fiscalización en respuesta al oficio de errores y omisiones, de donde la autoridad fiscalizadora contó con elementos para analizar si el sujeto obligado se había apegado o no a lo que establece la normatividad.

Debida fundamentación y motivación derivado del acatamiento de la sentencia SX-RAP-76/2018.

Para el caso particular, en las observaciones insertas en el Dictamen Consolidado INE/CG1152/2018 identificadas con los ID 26, 37,64 y 75, y que dan origen a las conclusiones 5_C11_P2, 5_C16_P1, 5_C27_P2 y 5_C32_P2, respectivamente, se señala que el partido MORENA realizó el registro contable en el Sistema Integral de Fiscalización de diversas operaciones de forma posterior a los tres días de realizadas las mismas, **pero dentro de los periodos de presentación de los informes** que deben ser generados y presentados por los sujetos obligados, conforme lo disponen los artículos 80, inciso d) de la Ley General de Partidos Políticos y 235, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, el criterio determinado por el Consejo General del Instituto Nacional

Electoral, es el de imponer la sanción correspondiente al **5% (cinco por ciento)** del monto involucrado en cada una de las conclusiones referidas.

Ahora bien, con referencia a la observación identificada con el ID 86 en el Dictamen Consolidado ya mencionado, y que generó la conclusión 5_C34_P2, se señala que el partido MORENA realizó el registro contable en el Sistema Integral de Fiscalización de 66 (sesenta y seis) operaciones **dentro del periodo de ajuste o corrección**, esto es, **después que la autoridad hizo del conocimiento del instituto político las observaciones detectadas**, a través de los oficios de errores y omisiones números INE/UTF/DA/32917/2018 e INE/UTF/DA/37604/2018, sin que las aclaraciones presentadas por el partido político hayan sido suficientes para revertir las observaciones realizadas; en consecuencia, una vez vencidos los plazos para la presentación de los informes de ingresos y gastos que se encuentran determinados en los artículos 80, inciso d) de la Ley General de Partidos Políticos y 235, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, por lo que a la autoridad le resultó materialmente imposible fiscalizar los recursos que dieron origen a la conclusión de mérito, **toda vez que el registro de operaciones lo realizó en el periodo de correcciones en respuesta al oficio de errores y omisiones**, lo cual no puede ser considerado como un cumplimiento a lo ordenado por la norma sustantiva, sino que, por el contrario, dicho registro extemporáneo constituye en sí mismo la transgresión a lo ordenado por la norma, en tal sentido dicha hipótesis normativa no puede retrotraerse a través de una conducta observada al sujeto obligado.

En otras palabras, en ambos casos el registro de la operación fue extemporáneo, sin embargo, en el primer supuesto (dentro de los periodos de presentación de los informes), esta autoridad electoral tiene mayores posibilidades de fiscalizar los recursos, que, si bien se registraron de manera extemporánea, aún se encuentran dentro del periodo a fiscalizar. Por otro lado, en el segundo supuesto (dentro del periodo de correcciones), el registro de la operación, además de ser extemporáneo, se realiza con posterioridad a la entrega del informe respectivo y en atención al oficio de errores y omisiones, es decir, una vez concluido el periodo a fiscalizar y a requerimiento de autoridad, por lo que la fiscalización de los recursos registrados en dichas operaciones resulta materialmente imposible.

En consecuencia, los registros contables fueron realizados de manera posterior a la emisión de los oficios de errores y omisiones de cada periodo, limitando con ello, de manera relevante, la actividad fiscalizadora de esta autoridad, debido que además de no reportar dentro de los tres días siguientes en que fue efectuada la operación, tuvo que mediar requerimiento de esta autoridad para que hicieran su debido reporte, por lo que el criterio de sanción señalado por esta autoridad para esta conducta transgresora de la normatividad electoral, es el del **30%** sobre el monto involucrado que en el presente caso correspondió a la cantidad de **\$1,932,821.64**, dando como monto resultado \$579,846.49 (quinientos setenta y nueve mil ochocientos cuarenta y seis pesos 49/100 M.N.), monto de la sanción impuesta en el Acuerdo INE/CG1153/2018.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta

(...)"

Así, una vez que se fundamentó y motivó la parte conducente respectiva, el criterio establecido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para la conducta de registrar operaciones contables en el Sistema Integral de Fiscalización durante el periodo de corrección o ajuste, es imponer una sanción equivalente al **30% (treinta por ciento)** del monto involucrado, el cual será motivo de análisis del siguiente considerando.

8. Que la Sala Regional Xalapa, al haber dejado intocadas en la sentencia recaída en el expediente SX-RAP-76-2018, las demás consideraciones que sustentan la Resolución INE/CG1153/2018 relativas al Partido MORENA en el estado de Tabasco y una vez fundamentada y motivada la parte conducente, este Consejo General únicamente se aboca a la modificación de la parte conducente del **inciso e)** dentro del **Considerando 38.5 Partido MORENA**, relativo a la **Conclusión 5_C34_P2**, en los términos siguientes:

"(...)

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

(...)

Conclusión 5_C34_P2

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus operaciones en tiempo real, **es decir, dentro de los plazos legales que la propia norma establece, sino que, presentó el registro contable de 66 (sesenta y seis) operaciones, después de la respectiva garantía de audiencia.**

Ya que, de conformidad con lo dispuesto por las fracciones II y III del inciso d), numeral 1 del artículo 80 de la Ley General de Partidos Políticos, la Unidad Técnica de Fiscalización cuenta con un periodo de 10 días posteriores a la presentación de los informes de campaña, para llevar a cabo la revisión al soporte documental de los mismos y una vez concluida otorgará 5 días naturales a los sujetos obligados, como periodo de Ajuste, para que se lleve a cabo la modificación y/o corrección de información a las operaciones correspondientes a determinado periodo, así como para la presentación de documentación o información en general, que le dé soporte a las operaciones en cuestión.

Dicho periodo de Ajuste, está contemplado dentro del Sistema y el mismo permitirá el acceso para el registro correspondiente, como se señala en el párrafo que antecede.

- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado **consistió en omitir realizar el registro contable de 66 (sesenta y seis) operaciones en tiempo real, realizándolos en el periodo de ajuste o corrección, es decir, en respuesta al oficio de errores y omisiones**, durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Tabasco, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.

- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.

- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$1,932,821.64 (un millón novecientos treinta y dos mil ochocientos veintiún pesos 64/100 M.N.).**
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En consecuencia, los registros contables fueron realizados de manera posterior a la emisión de los oficios de errores y omisiones de cada periodo, limitando con ello, de manera relevante, la actividad fiscalizadora de esta autoridad, debido que además de no reportar dentro de los tres días siguientes en que fue efectuada la operación, tuvo que mediar requerimiento de esta autoridad para que hicieran su debido reporte, por lo que el criterio de sanción señalado por esta autoridad para esta conducta transgresora de la normatividad electoral, es el del 30% sobre el monto involucrado que en el presente caso correspondió a la cantidad de \$1,932,821.64, dando como monto resultado \$579,846.49 (quinientos setenta y nueve mil ochocientos cuarenta y seis pesos 49/100 M.N.), monto de la sanción impuesta en el Acuerdo INE/CG1153/2018.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Por lo argumentos vertidos con anterioridad, **y toda vez que el sujeto obligado realizó el registro contable de 66 (sesenta y seis) operaciones dentro del periodo de ajuste o corrección derivado de la garantía de audiencia**, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al sujeto obligado en

atención a los elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al **30% (treinta por ciento)** sobre el monto total de las operaciones registradas fuera de tiempo real, que en la especie asciende a un total de **\$579,846.49 (quinientos setenta y nueve mil ochocientos cuarenta y seis pesos 49/100 M.N.)**.

(...)”

9. Que la sanción originalmente impuesta al Partido MORENA, en la resolución **INE/CG1153/2018**, consistió en:

Sanción en resolución INE/CG1153/2018	Modificación	Sanciones en Acatamiento a SX-RAP-76/2018
<p>e) 5 faltas de carácter sustancial o de fondo: (...) y 5_34_P2</p> <p><u>Conclusión 5 34 P2</u></p> <p>Reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$579,846.49 (quinientos setenta y nueve mil ochocientos cuarenta y seis pesos 49/100 M.N.).</p>	<p>En cumplimiento a lo resuelto por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el SX-RAP-76/2018, se fundó y motivó la sanción establecida en la conclusión 5_C34_P2.</p>	<p>e) 5 faltas de carácter sustancial o de fondo: (...) y 5_34_P2</p> <p><u>Conclusión 5 34 P2</u></p> <p>Reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$579,846.49 (quinientos setenta y nueve mil ochocientos cuarenta y seis pesos 49/100 M.N.).</p>

10. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el presente Acuerdo el **Resolutivo QUINTO** queda en los siguientes términos:

“(...)”

RESUELVE

“(...)”

QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando **38.5** de la presente Resolución, se impone a **Partido Morena**, las sanciones siguientes:

(...)

e) 5 Faltas de carácter sustancial o de fondo: **Conclusiones (...) y 5_C34_P2.**

(...)

Conclusión 5 34 P2

Reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$579,846.49 (quinientos setenta y nueve mil ochocientos cuarenta y seis pesos 49/100 M.N.)**.

(...)”

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y aa); y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

A C U E R D A

PRIMERO. Se **modifica** la parte conducente de la Resolución **INE/CG1153/2018**, aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, en los términos precisados en el Considerando **7, 8, 9 y 10** del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que informe a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SX-RAP-76/2018**, remitiéndole para ello copia certificada del mismo.

TERCERO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1280/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO SCM-RAP-76/2018

A N T E C E D E N T E S

I. Aprobación de la Resolución. El seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión ordinaria la Resolución, identificada con el número **INE/CG1111/2018**, que presentó la Comisión de Fiscalización del propio Instituto, respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Jefe de Gobierno, Diputados Locales y Alcaldes, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la Ciudad de México.

II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, el C. Gabriel del Monte Rosales, interpuso recurso de apelación ante la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a fin de controvertir la parte conducente de la Resolución aludida; mismo que se tuvo por recibido el expediente, integrándose bajo el número SCM-RAP-76/2018.

III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Ciudad de México resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el seis de septiembre de dos mil dieciocho, determinando en su **ÚNICO** Punto Resolutivo, lo que se transcribe a continuación:

*“**ÚNICO.** Se **revoca parcialmente**, en lo que fue materia de controversia, la resolución impugnada.”*

Derivado de lo anterior, en el recurso de apelación **SCM-RAP-76/2018**, se determinó revocar parcialmente la resolución impugnada, respecto de la conclusión 12.11_C4_P1, para que se reclasifique en el apartado que corresponda a la falta cometida y se reindividualice la sanción con base en la capacidad económica del actor y se determine el monto de la sanción a imponer, en el entendido de que no podrá ser mayor a la establecida por la Sala.

En ese sentido, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 370, 425, 426, 427, numeral 1, inciso a); 428, numeral 1, incisos c) y d); 430 y 431, numeral 3, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables, en consecuencia, la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de mérito.

C O N S I D E R A N D O

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, numeral 1, inciso a) y j); 190, numeral 1, 380, 370, 425, 426, 427, numeral 1, inciso a); 428, numeral 1, incisos c) y d); 430 y 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Jefe de Gobierno, diputados locales y alcaldes, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la Ciudad de México.

2. Que el seis de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Regional Ciudad de México, resolvió revocar la Resolución INE/CG1111/2018, parcialmente en lo que refiere a la conclusión 12.11_C4_P1 y la individualización de la sanción, del Considerando **33.12.3.1** correspondiente al C. Gabriel del Monte Rosales, únicamente para los efectos precisados en la resolución SCM-RAP-76/2018, por lo que a fin de dar cumplimiento a la misma, se procederá a la modificación de la Resolución de mérito, observando a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria.

3. Que, en la sección relativa al estudio de fondo, dentro del Considerando QUINTO, el órgano jurisdiccional señaló que:

“(…)

No.	Conclusión
12.11_C1_P1	“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 29 eventos de la agenda de actos públicos, de manera posterior a su celebración.”
12.11_C4_P1	“El sujeto obligado presenta el aviso de contratación que fue informado de manera extemporánea con fecha de presentación 13 de junio de 2018”
12.11_C7_P2	“El sujeto obligado informo de manera extemporánea 6 eventos de la agenda de actos públicos, de manera posterior a su celebración.”
12.11_C9_P2	“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 7 eventos de la agenda de actos públicos, el mismo día de su celebración.”

Referente a estas conclusiones, el actor afirma que

- La autoridad responsable concluye que se reportaron con posterioridad a su realización actos públicos dentro del módulo de agenda del SIF, sin embargo, dicha afirmación no se encuentra fundamentada respecto de la conclusión 12.11_C4_P1, ya que la sanción se sustenta en el artículo 143, Bis del Reglamento; cuando, lo que se pretende sancionar es la presentación extemporánea de avisos de contratación¹⁷.

(…)

Acerca de estos argumentos, esta Sala Regional estima el agravio **fundado**.

(…)

No obstante, tal y como lo indica el promovente, la fundamentación no es aplicable respecto a la conclusión 12.11_C4_P1; en tanto que, de la misma se advierte como conducta actualizada: “la presentación extemporánea del aviso de contratación”, la cual no tiene como sustento normativo el artículo 143 bis citado, sino el precepto 261 Bis y 278 del Reglamento¹⁸ que indica lo siguiente:

¹⁷ Si bien el actor de manera expresa no hace alusión a la conclusión 12.11_C4_P1, de la causa de pedir y, atendiendo a la suplencia que este órgano jurisdiccional se encuentre vinculado a realizar, es que, a partir de lo aducido por el promovente, se deduce su motivo de impugnación.

¹⁸ Tal y como se verifico en la conclusión identificada en el inciso e).

“Artículo 261 Bis. Especificaciones para la presentación de avisos de contratación

1. Los sujetos obligados durante precampañas y campañas contarán con un plazo máximo de tres días posteriores a la suscripción de los contratos, para la presentación del aviso de contratación, previa entrega de los bienes o a la prestación del servicio de que se trate”.

En vista de lo relatado, es que, a juicio de esta Sala Regional, la conducta acreditada¹⁹ en la conclusión **12.11_C4_P1** al analizarse, por parte de la autoridad responsable, en un apartado donde su fundamentación estribó en justificar la extemporaneidad de dar cuenta de la realización de eventos públicos y no de la presentación de avisos de contratación: incumplió con el artículo 16 Constitucional, que vincula a que todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, en el entendido de que, acerca de la fundamentación, debe expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y sobre la motivación, debe señalarse, con puntualidad, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto y, en consecuencia, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables.

Situación que en la conclusión **12.11_C4_P1** no acontece, en virtud de que tal y como lo señala el actor, en la resolución impugnada se desprende que la conducta corroborada fue: presentar avisos de contratación de modo extemporáneo; mientras que la fundamentación y motivación utilizada en dicho apartado se enfocó en determinar (individualización de la sanción), porqué se actualizaba la información extemporánea **de la agenda de actos públicos**.

(...)

Efectos. Sentido y efectos de esta sentencia. Conforme a lo expuesto, esta Sala Regional:

- A. Deja **intocadas** las razones y fundamentos no controvertidas de la resolución impugnada.
- B. **Confirma** las consideraciones respecto de las cuales los agravios resultaron infundados o fundados pero inoperantes.
- C. **Se Revoca parcialmente** la resolución impugnada, respecto de la conclusión **12.11_C4_P1**²⁰, así como el análisis de la graduación de las sanciones impuestas; y **ordena** a la Autoridad Responsable que:

¹⁹ Acreditación que no está puesta a debate por el actor.

²⁰ Visible en el inciso b) de la parte de la resolución impugnada.

- a. En el plazo de **(20) veinte días naturales** emita una nueva resolución, en la que:
Se reclasifique la conclusión **12.11_C4_P1**, en el apartado que corresponda a la falta cometida²¹.
Se re individualice la sanción (graduación de la multa) con base en la capacidad económica del actor y respecto de las Conclusiones, esto es, determine el monto de la multa a imponer **(en el entendido de que no podrá ser mayor a la consignada en letra)**²², y la notifique como corresponda.
- b. Una Vez hecho lo anterior, deberá informarlo a esta Sala Regional dentro de los **(3) tres días hábiles** siguientes a que ello ocurra.

En ese orden de ideas, esta autoridad procede a emitir la resolución ordenada, dando cumplimiento, revocando parcialmente la conclusión 12.11_C4_P1 del Considerando 34.3.5 en los términos que se precisan en la misma.

4. Que, conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso del recurso de apelación identificado como **SCM-RAP-76/2018**.

Es importante señalar que el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la determinación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) respecto del valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, el cual será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país,²³ mismo que para el ejercicio 2018, correspondió a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.).

Lo anterior de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

²¹ Y como consecuencia de ello se tome solo la acreditación de cuarenta y dos y no de cuarenta y tres eventos acreditados en el inciso b) de la resolución impugnada.

²² Ello con base en el principio *non reformatio in peius*, locución latina que puede traducirse al español como “no reformar en peor” o “No reformar en perjuicio”.

²³ De conformidad con el Punto Resolutivo PRIMERO de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de 2016, publicada el pasado 18 de diciembre de 2015, “para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales (Delegaciones) del Distrito Federal.”

Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo precedente establece “*A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.*”

En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de Medida y Actualización; por lo que, las multas impuestas en el presente Acuerdo, a las que les corresponde la aplicación del salario mínimo general vigente en el entonces Distrito Federal para el ejercicio 2018, se ajustan al valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente en 2018.

5. Que en tanto la Sala Superior, dejó intocadas las demás consideraciones que sustentan la Resolución identificada como **INE/CG1111/2018**, este Consejo General únicamente se avocará al estudio y análisis de lo relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en el Considerando **33.12.3.1**, conclusión **12.11_C4_P1** en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Regional, materia del presente Acuerdo.

Visto lo anterior, se modifica la individualización de la sanción para quedar en los términos siguientes:

33.12.3.1. C. GABRIEL DEL MONTE ROSALES

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del Informe de la campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado son las siguientes:

a) 6 Faltas de carácter formal: conclusiones (...) y 12.11_C4_P1.

(...)

a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias de carácter formal: **Conclusiones** (...) y **12.11_C4_P1**.

No.	Conclusión	Normatividad vulnerada
(...)	(...)	(...)
12.11_C4_P1	<i>“El sujeto obligado presenta el aviso de contratación que fue informado de manera extemporánea con fecha de presentación 13 de junio de 2018”</i>	<i>Artículo 261 BIS del RF.</i>

Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acredita una afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de los sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de recursos.²⁴

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 291, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del candidato independiente, la autoridad debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin embargo, la observación realizada no fue subsanada.

²⁴ Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobaron diversas faltas de forma, mismas que han sido señaladas en el presente estudio, lo conducente es individualizar la sanción, atento a las particularidades que en cada caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar las faltas determinando lo siguiente:

- a)** Tipo de infracción (acción u omisión).
- b)** Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
- c)** Comisión intencional o culposa de las faltas.
- d)** La trascendencia de las normas transgredidas.
- e)** Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.
- f)** La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g)** La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).

En el cuadro siguiente en la columna identificada como **(1)** se señalan las irregularidades cometidas por el sujeto obligado, en la columna **(2)** se indica si se trata de una omisión o una acción y en la columna **(3)** la norma vulnerada.²⁵

Descripción de la irregularidad observada (1)	Acción u omisión (2)	Normatividad vulnerada (3)
(...)	(...)	(...)
<i>Conclusión 12.11_C4_P1. ““El sujeto obligado presenta el aviso de contratación que fue informado de manera extemporánea con fecha de presentación 13 de junio de 2018”</i>	<i>Omisión</i>	<i>Artículo 261 BIS del RF.</i>

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.

El sujeto obligado incurrió en las irregularidades señaladas en el cuadro que antecede, identificadas con el número **(1)**, contraviniendo, en cada caso, la normatividad señalada en la columna **(3)**.

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas

²⁵ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003.

referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.

Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del financiamiento de los sujetos obligados.²⁶

En las conclusiones 12.11_C4_P1, el sujeto obligado en comentario, vulneró lo dispuesto en los artículos (...), 261 Bis del Reglamento de Fiscalización.²⁷

De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control contable de las operaciones que el sujeto obligado realice, es decir, los ingresos y egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello, por la autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar a cabo la función de la fiscalización.

²⁶ En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente:

*“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen una mera falta formal, **porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos**, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.*

*En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad **por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público**, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”*

²⁷ Mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen.

La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que los sujetos obligados utilizan como parte de su financiamiento.

En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus egresos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.

En síntesis, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con sus egresos, consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha documentación, con la finalidad

de comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.

Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus operaciones de forma clara.

Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos no se vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto a las actividades realizadas por el sujeto infractor, así como del origen, destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público o privado del sujeto obligado en cuestión.

En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por parte del sujeto obligado, a través del Sistema Integral de Fiscalización, y exhibir toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente citado.

Esto es, se trata de una diversidad de conductas e infracciones las cuales solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes políticos.

Así, es deber de los candidatos independientes informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los candidatos independientes, rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por

objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, derivada de la revisión del Informe de los ingresos y gastos de campaña en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera falta formal, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control en la rendición de cuentas.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto; y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación de las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por distintas conductas, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, por lo que la infracción expuesta en el apartado del análisis temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, consistentes en los errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de presentación de la totalidad de la documentación soporte de los ingresos y egresos del sujeto obligado, no se acredita la vulneración o afectación al aludido bien jurídico protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en conductas infractoras imputables al ente político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de rendición de cuentas.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche, pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

El sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en la existencia de **FALTAS FORMALES**, en las que se viola el mismo valor común, toda vez que, como se expuso en el inciso d), se trata de faltas que solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado control de recursos, sin que exista una afectación directa.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de las conductas a estudio.

Calificación de la falta.

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **LEVE**.

Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso g) del presente considerando.
(...)

g) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

Por lo que hace a las conclusiones (...), 12.11_C4_P1, (...).

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

a) Conclusiones (...) y 12.11 C4 P1.

- Que las faltas se calificaron como **LEVES**.
- Que, con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos referidos.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas infractoras fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el reglamento de la materia.
- Que al tratarse de diversas faltas existió pluralidad en la conducta por el sujeto obligado.

(...)

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.²⁸

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y Actualización, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el aspirante se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las circunstancias particulares del caso.

Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas.

Cabe señalar que, de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los siguientes:

²⁸ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; **II. Con multa de hasta cinco mil unidades de medida y actualización**, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato.

Inciso	Conclusión	Tipo de conducta	Monto Involucrado	Porcentaje de sanción	Monto de la sanción
a)	(...)	(...)	(...)	(...)	\$806.00
a)	(...)	(...)	(...)	(...)	\$806.00
a)	(...)	(...)	(...)	(...)	\$806.00
a)	(...)	(...)	(...)	(...)	\$806.00
a)	(...)	(...)	(...)	(...)	\$806.00
a)	12.11_C4_P1	Forma	N/A	10 UMA por conclusión	\$806.00
b)	(...)	(...)	(...)	(...)	\$23,374.00
b)	(...)	(...)	(...)	(...)	\$4,836.00
b)	(...)	(...)	(...)	(...)	\$5,642.00
c)	(...)	(...)	(...)	(...)	\$403.00
c)	(...)	(...)	(...)	(...)	\$20,553.00
d)	(...)	(...)	(...)	(...)	\$2,982.20
e)	(...)	(...)	(...)	(...)	\$7,898.80
f)	(...)	(...)	(...)	(...)	\$18,376.00
f)	(...)	(...)	(...)	(...)	\$42,234.40
Total					\$131,135.40

Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.

Respecto de la capacidad económica del candidato independiente, el artículo 223 bis, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades financieras, bancarias y fiscales.

Por lo que hace a la determinación de la capacidad económica de los candidatos independientes para hacer frente a las sanciones impuestas, la autoridad electoral tomó en consideración la información presentada directamente por los candidatos, de manera específica, en el informe de capacidad económica, en el cual se determinó tomar en cuenta el ingreso y un porcentaje creciente a saber:

Ingresos	Sanción
\$0 a \$100,000.00	Amonestación pública
\$101,000.00 a \$300,000.00	Hasta el 5%
\$301,000.00 a \$600,000.00	Hasta el 10%
\$601,000.00 a \$1,000,000.00	Hasta el 15%
\$1,000,001 a \$1,500,000.00	Hasta el 20%
\$1,500,001 en adelante	Hasta el 25%

No obstante lo anterior, en estricto cumplimiento a lo mandatado por la Sala Regional, en el SCM-RAP-76/2018, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra obligado a presentar el candidato independiente²⁹, se advirtió lo siguiente:

Ingresos (A)	Egresos (B)	Multa impuesta en el INE/CG200/2018 (C)	Saldo (A-B-C=D)	Capacidad Económica (25%D)
\$7,403,990.00	\$6,470,000.00	\$905.88	\$933,084.12	\$233,271.03

Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el candidato independiente de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa.

Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y

²⁹ Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización.

familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la situación económica.

Ahora bien, acorde a lo mandatado por la Sala Regional Ciudad de México en el SCM-RAP-76/2018, esto es, que el monto de sanción no podrá aumentar al importe ya establecido en la sentencia de mérito, y tomando en consideración que la imposición de la sanción correspondiente a las conductas aquí analizadas atendiendo a lo señalado en el cuadro que antecede es mayor a éste, lo procedente es imponer una sanción equivalente a **\$70,525.00 (Setenta mil quinientos veinticinco pesos 00/100 M.N.)**.

Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos antes señalados para determinar la capacidad económica del candidato independiente, este Consejo General concluye que la sanción a imponer al **C. Gabriel del Monte Rosales** por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a **875 (ochocientos setenta y cinco) Unidades de Medida y Actualización** para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de **\$70,525.00 (Setenta mil quinientos veinticinco pesos 00/100 M.N.)**.

6. Que la sanción originalmente impuesta al C. Gabriel del Monte Rosales, en la Resolución **INE/CG1111/2018** en su Resolutivo **VIGÉSIMO TERCERO**, así como las modificaciones procedentes con base a lo razonado en el presente Acuerdo:

Sanciones en Resolución INE/CG200/2018	Modificación	Sanción en Acatamiento a SM-RAP-82/2017
<p>VIGÉSIMO TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 33.12.3.1 de la presente Resolución, se imponen a la Candidata Independiente Gabriel Del Monte Rosales, las sanciones siguientes:</p> <p>a) 5 Faltas de carácter formal: conclusión 12.11_C3_P1, 12.11_C10_P2, 12.11_C11_P2, 12.11_C14_P2, 12.11_C19_P2.</p> <p>b) 4 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 12.11_C1_P1,</p>	<p>Revocación parcial de la conclusión 12.11_C4_P1 a efecto de su reclasificación y reindividualización de la sanción.</p>	<p>VIGÉSIMO TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 33.12.3.1 de la presente Resolución, se imponen al Candidato Independiente Gabriel Del Monte Rosales, las sanciones siguientes:</p> <p>a) 6 Faltas de carácter formal: conclusión 12.11_C3_P1, 12.11_C10_P2, 12.11_C11_P2, 12.11_C14_P2, 12.11_C19_P2 y 12.11_C4_P1.</p>

Sanciones en Resolución INE/CG200/2018	Modificación	Sanción en Acatamiento a SM-RAP-82/2017
<p>12.11_C4_P1, 12.11_C7_P2, 12.11_C9_P2.</p> <p>c) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 12.11_C2_P1, 12.11_C8_P2.</p> <p>d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 12.11_C5_P1.</p> <p>e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 12.11_C6_P1.</p> <p>f) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 12.11_C11-A_P2 y 12.11_C12_P2.</p> <p>Una multa equivalente a 1627 (Mil seiscientos veintisiete) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de \$131,136.20 (Setenta mil quinientos veinticinco pesos 00/100 M.N.).(...)"</p>		<p>b) 3 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 12.11_C1_P1, 12.11_C7_P2, 12.11_C9_P2.</p> <p>c) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 12.11_C2_P1, 12.11_C8_P2.</p> <p>d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 12.11_C5_P1.</p> <p>e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 12.11_C6_P1.</p> <p>f) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 12.11_C11-A_P2 y 12.11_C12_P2.</p> <p>Una multa equivalente a 875 (ochocientos setenta y cinco) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de \$70,525.00 (Setenta mil quinientos veinticinco pesos 00/100 M.N.).(...)"</p>

7. Que, de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el presente Acuerdo, se impone al **C. Gabriel del Monte Rosales**, la sanción siguiente:

VIGÉSIMO TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando **33.12.3.1** de la presente Resolución, se imponen al Candidato Independiente **Gabriel Del Monte Rosales**, las sanciones siguientes:

- a) 6 Faltas de carácter formal: conclusiones (...) 12.11_C4_P1.**
- b) 3 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 12.11_C1_P1, 12.11_C7_P2, 12.11_C9_P2.**
- c) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 12.11_C2_P1, 12.11_C8_P2.**
- d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 12.11_C5_P1.**
- e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 12.11_C6_P1.**
- f) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 12.11_C11-A_P2 y 12.11_C12_P2.**

Una multa equivalente a **875 (ochocientos setenta y cinco)** Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de **\$70,525.00 (Setenta mil quinientos veinticinco pesos 00/100 M.N.)**.

En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

A C U E R D A

PRIMERO. Se modifica la parte conducente de la Resolución **INE/CG1111/2018**, aprobada en sesión ordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Jefe de Gobierno, Diputados Locales y Alcaldes, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la Ciudad de México en los términos precisados en el Considerando **5** del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral que informe a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SCM-RAP-76/2018**, remitiéndole para ello las constancias atinentes.

TERCERO. Notifíquese electrónicamente el presente Acuerdo al Candidato Independiente, a través del Sistema Integral de Fiscalización.

CUARTO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México, a efecto de que proceda al cobro de la sanción impuesta, en términos del artículo 458, numeral 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán efectivas una vez que haya sido legalmente notificada la Resolución de mérito; los recursos obtenidos por las aplicaciones de las mismas serán destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, en los términos de las disposiciones aplicables.

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1281/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, CON SEDE EN XALAPA, VERACRUZ, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO SX-RAP-57/2018

A N T E C E D E N T E S

I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. El seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado y la Resolución, identificados con los números **INE/CG1102/2018** e **INE/CG1104/2018**, que presentó la Comisión de Fiscalización del propio Instituto, sobre la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Diputados Locales, integrantes de los Ayuntamientos así como Juntas Municipales, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Campeche.

II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el diez de agosto de dos mil dieciocho, el partido Movimiento Ciudadano, presentó recurso de apelación para controvertir la parte conducente al Dictamen Consolidado y la Resolución, identificados con los números **INE/CG1102/2018** e **INE/CG1104/2018**, es así que el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho se radicó y admitió el recurso de apelación en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera Circunscripción Electoral Plurinominal con sede en Xalapa, Veracruz (en adelante Sala Regional Xalapa), en el expediente identificado con la clave alfanumérica **SX-RAP-57/2018**.

III. Sentencia Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Xalapa resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, determinando en el Punto Resolutivo **PRIMERO y SEGUNDO**, lo que a continuación se transcribe:

***“PRIMERO.** Se modifica la resolución impugnada únicamente respecto de las conclusiones 1 y 5, para los efectos precisados en el Considerando Quinto de esta sentencia.*

***SEGUNDO.** En consecuencia, se confirma la resolución impugnada en sus restantes consideraciones, que quedaron intactas.*

IV. Toda vez que en la ejecutoria se ordenó a este Consejo General respecto a la conclusión 1 del Dictamen Consolidado y resolución del partido Movimiento Ciudadano, emitir una nueva resolución de manera exhaustiva, fundada y motivada, en la que atienda el plantamiento del partido actor respecto a que la presentación extemporánea del informe de campaña de Tania Esthephania Patricia Moreno Bulnes se debió a una situación extraordinaria, señalando de forma específica las circunstancias del caso concreto, y por lo que respecta a la conclusión 5 del Dictamen Consolidado y resolución para que se emita nueva resolución de manera exhaustiva en la que se excluya del monto sancionatorio el registro de la operación que se encuentra, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables, en consecuencia la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de mérito.

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44, numeral 1, incisos j); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos.

2. Que el seis de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Regional Xalapa resolvió modificar parcialmente por lo que refiere a las conclusiones 1 y 5 del partido Movimiento Ciudadano, el Dictamen Consolidado y resoluciones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificadas con las claves **INE/CG1102/2018 e**

INE/CG1104/2018, se procede a modificar el Dictamen Consolidado y la Resolución de mérito, observando a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria.

3. Que, en la sección relativa al estudio de fondo, dentro del Considerando CUARTO, el órgano jurisdiccional señaló que:

“(…)

CUARTO. Efectos.

115. Esta Sala Regional considera que al resultar sustancialmente fundados los agravios precisados en la parte considerativa de esta sentencia, se debe modificar el Dictamen Consolidado y la respectiva resolución impugnada, únicamente en cuanto a las conclusiones 1 y 5, con fundamento en el artículo 47, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; en los términos siguientes:

- Se modifica la conclusión 1 del Dictamen Consolidado, para el efecto de que la autoridad responsable emita una nueva resolución de manera exhaustiva, fundada y motivada, en la que atienda el planteamiento del partido actor respecto a que la presentación extemporánea del informe de campaña de Tania Estephania Patricia Moreno Bulnes se debió a una situación extraordinaria, señalando de forma específica las circunstancias del caso concreto, por las cuales, de así determinarlo, se advierta una falta atribuible a dicho partido.
- Se modifica la conclusión 5 del Dictamen Consolidado, para el efecto de que la autoridad responsable emita una nueva resolución de manera exhaustiva, en la que excluya del monto sancionatorio el registro de la operación que se encuentra duplicada.

116. En tal sentido, se ordena al Consejo General del INE que emita una diversa resolución, tomando en cuenta lo expuesto en la parte considerativa de esta ejecutoria.

117. Por lo anterior, se vincula al aludido Consejo General de INE para que informe a esta Sala Regional del cumplimiento dado a la presente ejecutoria, una vez que ello ocurra, dentro de las veinticuatro horas siguientes, debiendo adjuntar las constancias que acrediten el cumplimiento dado a lo aquí ordenado.

118. Lo anterior, con fundamento en el artículo 92 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

119. Por otro lado, se confirman el resto de las conclusiones, al resultar infundado el agravio que las controvertía, en términos de lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.
(...)”

4. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso del recurso de apelación identificado como **SX-RAP-57/2018**.

Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos y reglas locales, prevaleciendo las Leyes Generales.

Es importante señalar que el diez de enero de dos mil dieciocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA’s) vigente a partir del uno de febrero de dos mil dieciocho, mismo que asciende a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.).

Lo anterior de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo precedente establece *“A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.”*

En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de Medida y Actualización; por lo que, en el presente Acuerdo, en los supuestos que se actualice la imposición de sanciones económicas en días de salario a los sujetos obligados, se aplicará la Unidad de Medida y Actualización (UMA’s).

5. Que esta autoridad administrativa debe considerar que el partido político sujeto a sanción cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se les imponga.

En este sentido, mediante Acuerdo CG/02/2018 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2018 al partido Movimiento Ciudadano, el monto siguiente:

Partido político	Financiamiento público actividades ordinarias 2018
Movimiento Ciudadano	\$724,659.78

En este tenor, es oportuno mencionar que el partido político en comento está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad económica de los partidos políticos infractores es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al partido político Movimiento Ciudadano por este Consejo General, así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones:

Partido Político	Resolución de la Autoridad	Monto total de la sanción	Montos de deducciones realizadas al mes de junio de 2018	Montos de deducciones realizadas al mes de julio de 2018	Montos por saldar
Movimiento Ciudadano	INE/CG775/2015 Considerando 18.4 Conclusiones 2 y 5 (multa)	\$2,804	\$9,077.95		\$27,233.85

Partido Político	Resolución de la Autoridad	Monto total de la sanción	Montos de deducciones realizadas al mes de junio de 2018	Montos de deducciones realizadas al mes de julio de 2018	Montos por saldar
	INE/CG775/2015 Considerando 18.4 Conclusión 7 (multa)	\$29,932.70			
	INE/CG775/2015 Considerando 18.4 Conclusión 8 (multa)	\$3,575.10			
	INE/CG526/2017 Resolutivo 5 inciso a) (multa) inciso c) reducción de la ministración	a) \$2,038.23 c) \$180,527.70		\$60,175.90	\$122,390.03
				TOTAL	\$149,623.88

De lo anterior, se advierte que el partido Movimiento Ciudadano tiene un saldo pendiente al mes de julio de 2018 de \$149,623.88 (ciento cuarenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos 88/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del referido partidos, pues aun cuando tengan la obligación de pagar las sanciones anteriormente descritas, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, estarán en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en el presente Acuerdo.

6. Que la Sala Regional Xalapa, al haber dejado intocadas las demás conclusiones contenidas en el Dictamen Consolidado **INE/CG1102/2018** y, por tanto, las consideraciones que sustentan la Resolución **INE/CG1104/2018**, este Consejo General únicamente se abocará a la modificación de la parte conducente del Dictamen Consolidado relativo a las conclusiones 1 y 5 y el **Anexo 2**, así como del Considerando 31.4 del Partido Movimiento Ciudadano por lo que hace a los incisos a), relativo a la conclusión 1 y d) relativo a la conclusión 5; en cumplimiento a lo determinado por la Sala Regional Xalapa, en la ejecutoria materia del presente Acuerdo, en los términos siguientes:

7. Modificación del Dictamen Consolidado INE/CG1102/2018 respecto al Partido Movimiento Ciudadano.

Esta autoridad procedió, en acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Tercera Circunscripción Plurinominal, Xalapa, Veracruz, mediante Resolución **SX-RAP-57/2018**, a realizar una nueva revisión del informe de campaña de ingresos y gastos de la otrora candidata la C. Tania Estephania Patricia Moreno Bulnes, para emitir el respectivo Dictamen Consolidado y se determinó modificar el Dictamen INE/CG1102/2018 correspondiente al Partido Movimiento Ciudadano al tenor de lo siguiente:

Si bien es cierto que la candidata en comento fue registrada en dos cargos distintos, el primero por el partido Movimiento Ciudadano por el principio de Representación Proporcional y el segundo por Mayoría Relativa en la coalición “Por Campeche al Frente” debido a diversos problemas con la candidatura por cuestiones de paridad de género, también lo es que al ser de representación proporcional y no haber realizado gastos, dicha candidata no se encontraba obligada a presentar el informe respectivo. En ese orden de ideas la autoridad fiscalizadora determinó tener por atendida la observación.

Por lo que se refiere a la conclusión 4_C1_P1 respecto a la presentación del informe de campaña de manera extemporánea, esta autoridad determinó que al tratarse candidato de Representación Proporcional y toda vez que no realizó gastos de campaña no estaba obligado a presentar el Informe de Campaña como lo señala el artículo 243, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización; por lo antes expuesto la observación quedó atendida.

Esta autoridad procedió en acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Tercera Circunscripción Plurinominal, Xalapa, Veracruz, mediante Resolución **SX-RAP-57/2018**, a realizar una nueva revisión del informe de campaña de ingresos y gastos del otrora candidato C. Raymundo Torres Pérez, para emitir el respectivo Dictamen Consolidado y se determinó modificar el Dictamen INE/CG1102/2018 correspondiente al Partido Movimiento Ciudadano al tenor de lo siguiente:

En cuanto a la conclusión 4_C5_P2 referente a las operaciones extemporáneas, se constató la duplicidad de una póliza contable; por lo que esta autoridad rectificó los movimientos contables siendo las correctas tres operaciones extemporáneas por un importe de \$1,049.72; las cuales se pueden observar en el **Anexo 2**.

8. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto de la resolución INE/CG1104/2018.

En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace al apartado 31.4 de la resolución **INE/CG1104/2018**, denominado “**MOVIMIENTO CIUDADANO**”, esta autoridad electoral emite una nueva determinación en la que se analiza de forma exhaustiva y fundada y motivadamente la presentación extemporánea del informe de la otrora candidata C. Tania Estephania Patricia Moreno Bulnes correspondiente a la **conclusión 1** del Dictamen Consolidado del Partido Movimiento Ciudadano y por lo que corresponde a la **conclusión 5** del mismo partido se rectificaron los movimientos contables y se constato la duplicidad de una poliza contable, resultando registradas extemporáneamente únicamente tres operaciones por un importe de por un importe de \$1,049.72; las cuales se pueden observar en el Anexo 2 que también fue modificado.

En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la sentencia:

Sentencia	Efectos	Acatamiento
Se modifica la resolución impugnada únicamente respecto de las conclusiones 1 y 5, para los efectos precisados en el Considerando Quinto (sic) de esta sentencia.	<p>•Se modifica la conclusión 1 del Dictamen Consolidado, para el efecto de que la autoridad responsable emita una nueva resolución de manera exhaustiva, fundada y motivada, en la que atienda el planteamiento del partido actor respecto a que la presentación extemporánea del informe de campaña de Tania Estephania Patricia Moreno Bulnes se debió a una situación extraordinaria, señalando de forma específica las circunstancias del caso concreto, por las cuales, de así determinarlo, se advierta una falta atribuible a dicho partido.</p> <p>•Se modifica la conclusión 5 del Dictamen Consolidado, para el efecto de que la autoridad responsable emita una nueva resolución de manera exhaustiva,</p>	<p>Por lo que se refiere a la conclusión 4_C1_P1 respecto a la presentación del informe de campaña de manera extemporánea, esta autoridad determinó que al tratarse candidato de Representación Proporcional y toda vez que no realizó gastos de campaña no estaba obligado a presentar el Informe de Campaña como lo señala el artículo 243, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización; por lo antes expuesto la observación quedó atendida.</p> <p>En cuanto a la conclusión 4_C5_P2 referente a las operaciones extemporáneas, se constató la duplicidad de una póliza contable; por lo que esta autoridad rectificó los movimientos contables siendo</p>

Sentencia	Efectos	Acatamiento
	<i>en la que excluya del monto sancionatorio el registro de la operación que se encuentra duplicada.</i>	las correctas tres operaciones extemporáneas por un importe de \$1,049.72; las cuales se pueden observar en el Anexo 2.

Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa, este Consejo General modifica la Resolución número INE/CG1104/2018, relativo a las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Diputados Locales integrantes de los ayuntamientos, así como Juntas Municipales, en específico del partido Movimiento Ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Campeche , en los términos siguientes:

“(…) 31.4 MOVIMIENTO CIUDADANO”

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del Informe de la precampaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado son las siguientes:

“(…) ”

d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5

A continuación, se desarrollan los apartados en comento:

“(…) ”

d) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria infractora del artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización **conclusión 5.**

No.	Conclusión	Monto involucrado
5	<i>“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, durante el periodo de campaña excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$1,049.72”.</i>	\$1,049.72

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en la observación de mérito, misma que se hizo del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente de dicha notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como la documentación que subsanara la irregularidad detectada; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar la observación realizada.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia al candidato involucrado y se determine si hay responsabilidad en la irregularidad encontrada en la revisión de los informes de campaña materia de estudio en la entidad correspondiente, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6, del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de su candidato la observación que se detalla en el oficio referido en el análisis de la conclusión. Esto, a efecto que el candidato presentara las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con el candidato por conducto de su partido político, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de su candidato la irregularidad de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia y que el candidato contara con la oportunidad de preparar una adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de la conducta materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS”, capítulo III “*DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS*” de la legislación en comento, con relación al Libro Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes siguientes:

- 1) Informes del gasto ordinario:
 - a) Informes trimestrales.
 - b) Informe anual.
 - c) Informes mensuales.
- 2) Informes de Proceso Electoral:
 - a) Informes de precampaña.
 - b) Informes de obtención de apoyo ciudadano.
 - c) Informes de campaña.**
- 3) Informes presupuestales:
 - a) Programa Anual de Trabajo.
 - b) Informe de Avance Físico-Financiero.
 - c) Informe de Situación Presupuestal.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario solidarios del cumplimiento de los informes gastos que se refieren en el inciso anterior, y”*.

De lo anterior se desprende que no obstante que el sujeto obligado haya omitido realizar registros contables en tiempo real, no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda interna.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir,

el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea el partido político y/o el candidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan¹.

En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización, establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe

¹ Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.

la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efecto de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza

la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación²:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y

² Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, las respuestas del sujeto obligado no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendientes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito al partido político pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión)
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 21 de la presente Resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.

Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión 5 del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Campeche.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una **omisión** consistente en incumplir con su obligación de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.³

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Campeche, por lo que vulneró lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, durante el periodo de campaña excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$1,049.72.”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Campeche, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

³ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de violación alguna del citado sujeto obligado, para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad y la certeza en la rendición de cuentas.

Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comentario vulneró lo dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización⁴.

⁴ "Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente reglamento (...) 5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto."

Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir realizar el registro de operaciones contables en tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad fiscalizadora electoral.

La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la norma, lo cual vulneraría el Estado de Derecho.

De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización.

Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un sujeto obligado no registre a tiempo los movimientos de los

recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebató a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que fiscaliza.

Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que correspondan.

Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como una falta sustantiva, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea.

En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y paradigmas del sistema previsto en la legislación.

Ahora bien, por lo que respecta a los registros de operaciones realizados en el periodo de correcciones en respuesta al oficio de errores y omisiones, se debe analizar a la luz de las particularidades del sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los sujetos obligados, creado a partir de la reforma del año 2014, pues dicho sistema atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

En el caso concreto, la obligación de los sujetos obligados consiste en registrar las operaciones en la temporalidad que señala la normatividad, esto es, **dentro de los plazos que la propia norma establece.**

No obstante lo anterior, una vez analizado todos y cada uno de los registros realizados en el Sistema Integral de Fiscalización, esta autoridad obtuvo certeza respecto a que las operaciones materia del presente apartado no fueron registrados en el periodo respectivo, siendo que dicho sistema es la herramienta informática que hace prueba plena para la autoridad de lo ahí registrado y de la documentación exhibida por los sujetos obligados.

Ahora bien, derivado de la naturaleza de la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos efectuados durante la campaña, en la temporalidad señalada, la omisión en el cumplimiento ***per se*** no es una falta subsanable, pues en el mismo momento en que el sujeto obligado no realiza el debido registro **dentro de los plazos específicos** y a través del medio que establece la normativa electoral, queda configurada la infracción.

Al respecto resulta dable destacar que el sistema normativo electoral regula los distintos procedimientos electorales bajo un sistema de etapas y plazos a fin de que los actores políticos cuenten con una mayor seguridad jurídica respecto de la actuación de la autoridad y de su propia actividad política; es por ello que el reporte de los ingresos y gastos en el tiempo establecido para ello **resulta esencial para dotar de mayor certeza el desarrollo de los procesos electorales.**

Permitir que los sujetos registren operaciones en cualquier momento, vulnerando lo anterior, rompería el modelo de fiscalización al poner en riesgo el ejercicio de las facultades de la autoridad relativas al análisis y valoración de la totalidad de la información presentada por dichos sujetos con proximidad a la aprobación de los dictámenes y resoluciones, es por ello que **los plazos referidos son de aplicación estricta en cada una de sus etapas**, desde la presentación de los informes, hasta la notificación del oficio de errores y omisiones, así como de la respuesta recaída al mismo, con lo que se garantiza a los sujetos obligados la debida audiencia.

Para tal efecto, la Ley General de Partidos Políticos dispone en su artículo 80 las etapas involucradas en la fiscalización de las campañas, en aras de tutelar la integralidad que debe regir en todo el Proceso Electoral y de la revisión de los ingresos y gastos involucrados.

Al respecto, en el procedimiento de fiscalización de campañas se tutela la garantía de audiencia de los sujetos obligados mediante la notificación del oficio de errores y omisiones, siendo la respuesta que formulen al mismo el momento procesal oportuno para realizar las manifestaciones que consideren pertinentes y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador.

En apego a lo expuesto, en el marco de la revisión de los Informes de campaña, la autoridad fiscalizadora otorgó la garantía de audiencia al sujeto obligado, derivado de lo cual, en respuesta al oficio de errores y omisiones el partido reportó diversos ingresos y gastos.

No obstante lo anterior, del análisis a los ingresos y gastos reportados en respuesta ha dicho oficio de errores y omisiones, la autoridad fiscalizadora llegó a la conclusión que el registro de dichas operaciones se había realizado de manera extemporánea, esto es, fuera de los plazos que establece el artículo 38 del Reglamento de Fiscalización.

Derivado de ello, es de destacarse que la garantía de audiencia debe ser entendida como la posibilidad de que el sujeto regulado presente ante esta autoridad argumentos y documentación que acrediten que cumplió en tiempo y forma con sus obligaciones en materia de fiscalización y no como una exención a ello, pues esto atentaría con la aplicación efectiva de las normas.

Permitir a los sujetos regulados registrar en cualquier momento las operaciones relativas a sus ingresos y gastos, so pretexto de realizar dichos registros en respuesta al oficio de errores y omisiones girado por la autoridad fiscalizadora, desincentivaría a los sujetos obligados el cumplir en tiempo sus obligaciones.

No obstante lo anterior, y tal como ha quedado previamente detallado, la omisión de registrar las operaciones en tiempo real, es una falta que por su propia naturaleza no es subsanable.

Al respecto, resulta aplicable por analogía, el criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SX-RAP-7- 2016, mediante el cual determinó que el rebase del tope de gastos de campaña es la conclusión a la que llega el ente fiscalizador después de analizar el Informe respectivo, dado que a partir de la información que le es proporcionada por los sujetos obligados y el ejercicio de sus facultades de fiscalización, la autoridad se encuentra en posibilidad de establecer si aconteció algún rebase a los topes de gastos establecidos y, en su caso, el monto respectivo; motivo por el cual no es una observación que se formule en el oficio de errores y omisiones previsto en el artículo 80 numeral 1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley General de Partidos Políticos.

Lo anterior toda vez que, conforme a lo expuesto, fue precisamente de la documentación y registros realizados en el Sistema Integral de Fiscalización en repuesta al oficio de errores y omisiones, de donde la autoridad fiscalizadora contó con elementos para analizar si el sujeto obligado se había apegado o no a lo que establece la normatividad.

Así las cosas, ha quedado acreditado que al realizar registros contables en forma extemporánea, es decir, al omitir realizar los registros contables en tiempo real, el sujeto obligado vulnera la hipótesis normativa prevista en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la

misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta señalada, es la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, a través del registro en tiempo real realizado por el sujeto obligado en el manejo de sus recursos.

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto obligado se traduce en **una falta** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los sujetos obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la rendición de cuentas.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando 21 de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

Conclusión 5

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus operaciones en tiempo real, durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en omitir realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Campeche, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
 - Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$1,049.72 (Mil cuarenta y nueve pesos 72/100 M.N.)**.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la

elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁵

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al 15% (Quince por ciento) sobre el monto total de las operaciones registradas fuera de tiempo real, que en la especie asciende a un total de **\$ 157.35 (Ciento cincuenta y siete pesos 35/100 M.N.).**

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Movimiento Ciudadano, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% (Veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$157.35 (Ciento cincuenta y siete pesos 35/100 M.N.).**

⁵ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

9. Que la sanción originalmente impuesta al Partido Movimiento Ciudadano, en la resolución **INE/CG1104/2018** consistió en:

Sanciones en Resolución INE/CG1104/2018	Modificación	Sanciones en Acatamiento a SX-RAP-57/2018
<p>a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1.</p> <p>Sanción imputable:</p> <p>En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Movimiento Ciudadano, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1, del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción de ministración del 25% veinticinco por ciento de la ministración mensual que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanza el monto líquido de \$2,684.08 (Dos mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 08/100 M.N.).</p>	<p>La conclusión 1 se tuvo por atendida en el Dictamen Consolidado, por lo tanto se elimina el inciso a)</p>	<p><i>Se elimino el inciso a) del Partido Movimiento Ciudadano de la Resolución al tener por atendida la observación en el Dictamen Consolidado.</i></p>
<p>d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5.</p> <p>Sanción imputable:</p> <p>En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Movimiento Ciudadano, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de</p>	<p>En la conclusión 5 se modificó el monto involucrado al verificarse los montos de las operaciones extemporáneas quedando un monto de \$1,049.72 (Mil cuarenta y nueve pesos 72/100 M.N.).</p>	<p>d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5</p> <p>Sanción imputable: En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Movimiento Ciudadano, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos</p>

Sanciones en Resolución INE/CG1104/2018	Modificación	Sanciones en Acatamiento a SX-RAP-57/2018
Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% (Veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$292.46 (Doscientos noventa y dos pesos 46/100 M.N.) .		Electorales, consistente en una reducción del 25% (Veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$157.35 (Ciento cincuenta y siete pesos 35/100 M.N.) .

10. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en los Considerandos **7, 8 y 9** del Acuerdo de mérito, se impone al Partido Movimiento Ciudadano, la sanción consistente en:

d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión **5**

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$157.35 (Ciento cincuenta y siete pesos 35/100 M.N.)**.

En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

A C U E R D A

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado y la Resolución, identificados con los números **INE/CG1102/2018** e **INE/CG1104/2018**, aprobados en sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, con relación a los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Diputados Locales, Ayuntamientos y Juntas Municipales, en específico del Partido Movimiento Ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-

2018 en el estado de Campeche, en los términos precisados en el considerando **7, 8, 9 y 10** del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera Circunscripción Electoral Plurinominal con sede en Xalapa Veracruz, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SX-RAP-57/2018**, remitiéndole para ello las constancias atinentes.

TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Organismo Público Local Electoral de Campeche y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de notificar a los sujetos interesados a la brevedad posible; por lo que se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado.

CUARTO. Hágase del conocimiento del Organismo Público Local Electoral de Campeche a efecto de que procedan al cobro de las sanciones impuestas, en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme, de conformidad con lo establecido en los considerandos, ocho y diez del presente Acuerdo con relación al INE/CG61/2017.

QUINTO. Se instruye al Organismo Público Local Electoral de Campeche que en términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas con base en la capacidad económica, sean destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables.

SEXTO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de la sanción impuesta en la presente Resolución, en términos de lo dispuesto en el Artículo Transitorio PRIMERO del Acuerdo INE/CG61/2017.

SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

ANEXO 1

DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN AL CONSEJO GENERAL DE INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE CAMPAÑA DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE DIPUTADOS LOCALES, AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017 – 2018 EN EL ESTADO DE CAMPECHE.

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

ID	Observación	Escrito de respuesta	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió										
1	<p>Oficio Núm. INE/UT/DA/33175/18 INE/UT/DA/37439/18</p> <p>Primer informe</p> <p>Informes</p> <p>El sujeto obligado presentó de forma extemporánea los siguientes informes de campaña:</p> <table><tr><th>C</th><th>ID Contabilidad</th><th>Nombre</th><th>Cargo</th><th>Municipio/Distrito</th></tr><tr><td>1</td><td>47802</td><td>Tania Estephania Patricia Moreno Bulnes</td><td>Diputado Local RP</td><td>20-Palizada</td></tr></table>	C	ID Contabilidad	Nombre	Cargo	Municipio/Distrito	1	47802	Tania Estephania Patricia Moreno Bulnes	Diputado Local RP	20-Palizada	<p>COE/TESO018/2018 de fecha 15 de junio de 2018</p> <p>COE/TESO020/2018 de fecha 13 de julio de 2018</p> <p>Con escrito COE/TESO018/2018 de fecha 15 de junio del 2018, manifestó lo que a letra se transcribe:</p> <p>(...)“Con relación a la presentación extemporánea del informe de campaña de la candidata Tania Estephania Moreno Bulnes manifestamos que esta candidata cuenta con dos ID de Contabilidad, el número 47802 en Movimiento Ciudadano y el número 47681 en la coalición “Por Campeche al Frente”; el motivo de esta duplicidad fue porque la candidatura aludida estuvo en litigio por cuestiones de paridad de género, y mientras que el número de ID 47681 era ocupado por el candidato Jorge Alberto Azcorra Pérez dentro de la coalición, la Candidata Tania Estephania Moreno Bulnes fue dada de alta en Movimiento Ciudadano como R.P. mientras se resolvía el problema legal de su candidatura.</p> <p>A mediados del mes de Mayo de 2018, una vez resuelta dicha controversia la candidata</p>	<p>No atendida</p> <p>De la revisión al SIF y del escrito de respuesta se observó que, si bien el sujeto obligado a la fecha de presentación del primer informe de campaña mantenía activo un litigio por paridad de género, el ID de contabilidad 47802 a nombre de Tania Estephania Patricia Moreno Bulnes se encontraba activo por lo que el sujeto obligado debió haber presentado el informe correspondiente en la fecha establecida; por tal razón, la observación quedó no atendida.</p>	<p>4_C1_P1</p> <p>El sujeto obligado presentó de manera extemporánea el informe derivado de la garantía de audiencia que se le otorgó al candidato por la aplicación del CF/001/2018.</p>	<p>Entrega extemporánea de informe presentado por el candidato derivado de la garantía de audiencia que se le otorgó por la aplicación del CF/001/2018</p>	<p>Artículos 394, numeral 1, inciso n) y 431, numeral 1 de la LGIPE y 235 numeral 1, incisos a) y c) del RF</p>
C	ID Contabilidad	Nombre	Cargo	Municipio/Distrito												
1	47802	Tania Estephania Patricia Moreno Bulnes	Diputado Local RP	20-Palizada												

ID	Observación	Escrito de respuesta	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
	Oficio Núm. INE/UTF/DA/33175/18 INE/UTF/DA/37439/18	<p>COE/TE/ISO018/2018 de fecha 15 de junio de 2018 COE/TE/ISO020/2018 de fecha 13 de julio de 2018</p> <p>en cuestión hereda el número de ID 47681 con el que fue dado de alta el candidato Jorge Alberto Azcorra Pérez dentro de la coalición "por Campeche al Frente", y una vez que el mismo es dado de baja, se procede a dar de alta a la Candidata Tania Estephania Moreno Bulnes en la coalición, debiendo por lógica al mismo tiempo haber sido dado de baja con el número de ID 47802 en Movimiento Ciudadano.</p> <p>Por lo tanto, toda su contabilidad, pagos, aportaciones de simpatizantes, transferencias, etc... fueron registrados con el ID 47681 dentro de la coalición "Por Campeche al Frente". Así mismo el informe correspondiente al primer periodo fue presentado de manera oportuna, es decir, en tiempo y forma en dicha coalición optando por no duplicar dichas operaciones al presentar dos informes completamente distintos de un mismo candidato, ya que donde se registraron sus operaciones fue donde se procedió a presentar el informe.</p> <p>Sin embargo y a requerimiento de la Unidad Técnica de Fiscalización con Oficio INE/UTF/DA/32238/18 se procedió a presentar informe de la Candidata Tania Estephania Moreno Bulnes</p>				

ID	Observación	Escrito de respuesta	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
	Oficio Núm. INE/UTF/DA/33175/18 INE/UTF/DA/37439/18	COE/TEESO018/2018 de fecha 15 de junio de 2018 COE/TEESO020/2018 de fecha 13 de julio de 2018				
		con número de ID 47802 en Movimiento Ciudadano de manera extemporánea con las reservas correspondientes, para evitar sanciones posteriores y en espera de efectuar la aclaración respectiva que se describe en el presente texto. "(...)"				
9	Sistema Integral de Fiscalización Registro de operaciones extemporáneas Se observaron registros contables extemporáneos, excediendo los tres días posteriores a la realización de las operaciones, los casos en comento se detallan en el Anexo 2 Se solicita presenta en el SIF, lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> Las aclaraciones que a su derecho convengan Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5, del RF.	Con escrito COE/TEESO020/2018 de fecha 13 de julio de 2018, manifestó lo que a letra se transcribe: "(...) Efectivamente las operaciones descritas en el anexo 2 fueron registradas con 5 días de atraso ya que los comprobantes fueron enviados por el candidato de manera extemporánea (...)"	No Atendida De la revisión al SIF y al escrito de respuesta presentado por el partido, se observó que si bien, como lo menciona los comprobantes fueron enviados de forma extemporánea por el candidato, los registros contables en cuestión fueron realizados con fecha posterior por lo que no cumplieron con la normatividad establecido para el registro de las operaciones en tiempo real, por tal razón la observación no quedó atendida . El detalle se presenta en el Anexo 2-P2 .	4. C5. P2 El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 4 operaciones en tiempo real, durante el periodo de campaña excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$1,949.72.	Omisión de reportar operaciones en tiempo real (Registro extemporáneo en el SIF)	Artículo 38 numerales 1 y 5 del RF.

Esta autoridad procedió en acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Cuarta Circunscripción Plurinomial, Xalapa, Veracruz, mediante resolución **SX-RAP-57/2018**, a realizar una nueva revisión del informe de campaña de ingresos y gastos del otra candidata C. Tania Estephania Patricia Moreno Bulnes, para emitir el respectivo dictamen consolidado y se determinó lo siguiente:

Si bien es cierto que la candidata en comento fue registrada en dos cargos distintos, el primero por el partido Movimiento Ciudadano por el principio de Representación Proporcional y el segundo por Mayoría Relativa en la coalición "Por Campeche al Frente" debido a diversos problemas con la candidatura por cuestiones de paridad de género, también lo es que al ser de representación proporcional y no haber realizado gastos, dicha candidata no se

encontraba obligada a presentar el informe respectivo. En ese orden de ideas la autoridad fiscalizadora determinó tener por atendida la observación.

Por lo que se refiere a la conclusión 4_C1_P1 respecto a la presentación del informe de campaña de manera extemporánea, está autoridad determinó que al tratarse candidato de Representación Proporcional y toda vez que no realizó gastos de campaña no estaba obligado a presentar el Informe de Campaña como lo señala el artículo 243, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización; por lo antes expuesto la observación quedó atendida.

Esta autoridad procedió en acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Cuarta Circunscripción Plurinomial, Xalapa, Veracruz, mediante resolución **SX-RAP-57/2018**, a realizar una nueva revisión del informe de campaña de ingresos y gastos del otrora candidato C. Raymundo Torres Pérez, para emitir el respectivo dictamen consolidado y se determinó lo siguiente:

En cuanto a la conclusión 4_C5_P2 referente a las operaciones extemporáneas, se constató la duplicidad de una póliza contable; por lo que esta autoridad rectificó los movimientos contables siendo las correctas tres operaciones extemporáneas por un importe de \$1,049.72; las cuales se pueden observar en el **Anexo 2_P2**.

ANEXO 2. P2
 REGISTROS CONTABLES EXTEMPORÁNEOS, EXCEDIENDO LOS TRES DÍAS POSTERIORES A LA REALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES

Cons.	Id Cont.	Entidad	Cargo	Sujeto Obligado	Nombre de candidato	Referencia contable	IMPORTE	Fecha de Operación	Fecha de Registro	Diferencia de días
1	47002	CAMPECHE	JUNTA MUNICIPAL MR	MOVIMIENTO CIUDADANO	RAYMUNDO TORRES PEREZ	P2/NPD-1/09-06-18	\$ 900.00	01/06/2018	09/06/2018	5
2	47002	CAMPECHE	JUNTA MUNICIPAL MR	MOVIMIENTO CIUDADANO	RAYMUNDO TORRES PEREZ	PC2/DR-1/27-06-2018	\$ 20.72	27/06/2018	11/07/2018	14
3	47002	CAMPECHE	JUNTA MUNICIPAL MR	MOVIMIENTO CIUDADANO	RAYMUNDO TORRES PEREZ	PC2/DR-2/27-06-2018	\$ 129.00	27/06/2018	11/07/2018	14
Total							\$ 1,049.72			

INE/CG1282/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, CON SEDE EN MONTERREY, RELACIONADO CON EL NÚMERO SM-RAP-75/2017

A N T E C E D E N T E S

I. En sesión ordinaria celebrada el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen Consolidado **INE/CG519/2017**, así como la Resolución **INE/CG520/2017** respecto de las irregularidades derivadas de la revisión de los informes anuales de los ingresos y gastos del Partido de la Revolución Democrática, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis.

II. Recurso de apelación. Inconforme con lo anterior, el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, el Partido de la Revolución Democrática interpuso recurso de apelación para controvertir la citada resolución **INE/CG520/2017**.

III. Integración del expediente. El siete de diciembre de dos mil diecisiete la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió acuerdo de escisión de la demanda a fin de que la problemática jurídica de cada una de las entidades federativas involucradas fuera analizada en recursos de apelación independientes, integrándose así el expediente identificado con la clave **SM-RAP-75/2017**, el cual fue turnado a la ponencia del Magistrado Jorge Emilio Sánchez-Cordero Grossmann.

IV. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso referido en sesión pública celebrada el once de enero de dos mil dieciocho, determinando en su Resolutivo **SEGUNDO y TERCERO**, lo siguiente:

“SEGUNDO. Se **revocan**, la conclusión **2**, en parte, así como en la totalidad de lo estudiado, las conclusiones **3, 6, 9, 11, 14 y 31**, en los términos precisados en el presente fallo.

TERCERO. Se **ordena** al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, proceda conforme a lo señalado en el apartado de efectos de esta sentencia.”

V. Primer acuerdo de cumplimiento. En sesión extraordinaria celebrada el catorce de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo identificado con clave alfanumérica **INE/CG158/2018**, determinación que derivó del mandato realizado por la autoridad jurisdiccional en la sentencia SM-RAP-75/2017.

VI. Acuerdo plenario. Analizadas que fueron las acciones desplegadas por este Instituto Nacional Electoral a fin de acatar lo mandado por la autoridad jurisdiccional, el veintidós de marzo de dos mil dieciocho la H. Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió diverso acuerdo plenario a través del cual determinó que, bajo su óptica, no había lugar a tener por cumplimentada en sus términos los efectos de la sentencia primigenia SM-RAP-75/2017.

VII. Consecuencia de lo anterior, y bajo las directrices expuestas en el acuerdo plenario de cumplimiento de mérito en relación con la sentencia primigenia, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son definitivas e inatacables, se presenta el proyecto de mérito.

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, incisos a), n) y s) de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) y aa); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis presentados por el Partido de la Revolución Democrática.

2. Que el once de enero del dos mil dieciocho la Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal con sede en Monterrey, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar la Resolución para los efectos precisados en la ejecutoria, identificada con el número **INE/CG520/2017**, dictada por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, misma que fue impugnada por el **Partido de la Revolución Democrática**, para los efectos precisados en el presente Acuerdo.

Por su parte, el acuerdo plenario de fecha veintidós de marzo de dos mil dieciocho, tuvo por no cumplimentada la sentencia primigenia, ordenando a esta autoridad electoral la emisión de nuevo acuerdo a través del cual se dé cumplimiento a lo ordenado en la sentencia **SM-RAP-75/2017**, en términos de lo expuesto en el apartado III del acuerdo plenario aludido.

3. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso del recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica **SM-RAP-75/2017**.

4. Que por lo anterior y en razón del considerando 6 de la sentencia **SM-RAP-75/2017**, apartado denominado **EFFECTOS**, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó lo que a continuación se transcribe:

“(…)

6. EFECTOS.

6.2. Revocar, la conclusión 2, en parte, así como en la totalidad de lo estudiado, las conclusiones 3, 6, 9 11 ,14 y 31, **para el efecto** de que el Consejo General emita una nueva resolución y fije la cantidad equivalente con base a la Unidad de Medida vigente en el dos mil dieciséis.

6.3 Una vez que la autoridad responsable cumpla con lo ordenado, **deberá informarlo** a esta Sala Regional dentro de las **veinticuatro horas** siguientes a que ello ocurra, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten.

(...)"

Por su parte el Acuerdo Plenario de fecha veintidós de marzo de dos mil dieciocho, determinó lo siguiente:

"ACUERDO PLENARIO

(...)

III. No procede tener la sentencia por cumplida.

(...)

Al respecto, esta Sala Regional estima que lo anterior no es apto por tener por cumplida la sentencia, toda vez que la autoridad responsable únicamente debió ceñirse a lo ordenado por este órgano jurisdiccional, es decir, debió ajustarse a los Puntos Resolutivos de la misma, pues con la acción desplegada rebasó los límites y alcances fijados en el mencionado fallo, incurriendo de manera evidente en una conducta excesiva en el cumplimiento de la resolución dictada por este Tribunal.

(...)

En consecuencia, dicha autoridad deberá emitir a la brevedad un nuevo acuerdo, en el cual únicamente debe ajustarse a lo resuelto por este órgano jurisdiccional, es decir, fijar la cantidad correspondiente a las faltas formales respecto de la conclusión 2, en parte, así como en la totalidad de lo estudiado, las conclusiones 3, 6, 9, 11, 14 y 31 revocadas en el fallo de este asunto, para ser cuantificadas con la Unidad de Medida de Actualización correspondiente al año dos mil dieciséis.

(...)

*Esta Sala Regional **ACUERDA:***

(...)

SEGUNDO. *No se tiene por cumplida la sentencia dictada en el presente recurso.*

TERCERO. *Se ordena al Consejo General del instituto Nacional Electora que, a la brevedad posible, realice las actuaciones **necesarias para dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia dictada en este medio de impugnación, en términos de lo dispuesto por el apartado III de este Acuerdo plenario.***

5. Que debe considerarse que el partido político cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con las sanciones que en su caso se le imponga, toda vez que le fueron asignados recursos como financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2018.

Así, el monto de financiamiento local es el siguiente:

Entidad	Acuerdo	Financiamiento de las actividades ordinarias permanentes 2018
Coahuila	IEC/CG/200/2017	\$8,951,512.97

En este tenor, es oportuno mencionar que el partido político en comento está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al **Partido de la Revolución Democrática**, así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones:

Entidad	Resolución de la Autoridad	Monto total de la sanción	Montos de deducciones realizadas al julio de 2018	Montos por saldar	Total de montos por saldar
Coahuila	INE/CG810/2016	\$59,364.04	\$59,364.04	\$0.00	\$3,544,294.50
Coahuila	INE/CG127/2017	\$21,258.72	\$21,258.72	\$0.00	
Coahuila	INE/CG313/2017	\$1,957,244.66	\$1,957,244.66	\$0.00	
Coahuila	INE/CG447/2017	\$211,047.52	\$211,047.52	\$0.00	
Coahuila	INE/CG158/2018	\$10,517.76	\$10,517.76	\$0.00	
Coahuila	INE/CG311/2018	\$754.90	\$754.90	\$0.00	
Coahuila	INE/CG520/2017	\$4,135,941.59	\$591,647.09	\$3,544,294.50	

6. Que en tanto la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó intocadas las demás consideraciones que sustenta la Resolución identificada como **INE/CG520/2017**, este Consejo General únicamente se centrará al estudio y análisis de lo relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en el considerando **17.2.8**, inciso **a)**, conclusiones **2, 3, 6, 9, 11, 14 y 31**, en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Regional Monterrey, materia del presente Acuerdo.

7. Que en virtud de lo previamente expuesto, este Consejo General únicamente se abocará al ajuste de las sanciones impuestas derivadas de las conclusiones **2**, en parte, **3, 6, 9, 11, 14 y 31**, dejando intocadas las demás conclusiones que se encuentran en el inciso **a)** del apartado **17.2.8**, de la Resolución primigenia **INE/CG520/2017**.

Para mayor claridad, se expone el siguiente cuadro comparativo:

Sanciones en Resolución INE/CG520/2017	Sentencia SM-RAP-75/2017	Acuerdo de cumplimiento INE/CG158/2018	Efectos Acuerdo Plenario
<p>NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 17.2.8 correspondiente al Comité Ejecutivo Estatal de Coahuila (...)</p> <p>a) 16 faltas de carácter formal: Conclusiones 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 22, 25, 28, 31, 32 y 34.</p> <p>Una multa equivalente 144 (ciento cuarenta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecisiete, equivalente a \$10,870.56 (diez mil ochocientos setenta pesos 56/100 M.N.)</p>	<p>Se revoca, la conclusión 2, en parte, así como la totalidad de lo estudiado, las conclusiones 3, 6, 9, 11, 14 y 31 del apartado 17.2.8. de la Resolución relativo a la imposición de las multas impuestas al PRD equivalentes a 144 (cientos cuarenta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil diecisiete, equivalentes a la cantidad de \$10, 870.56 (diez mil ochocientos setenta pesos 56/100 M.N.), por irregularidades en el cumplimiento del control de la rendición de cuentas, para tal efecto de que la autoridad responsable emita una nueva resolución y fije la cantidad equivalente con base a la Unidad de Medida y Actualización vigente a dos mil dieciséis (...)</p>	<p>NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 17.2.8 correspondiente al Comité Ejecutivo Estatal de Coahuila (...)</p> <p>a) 16 faltas de carácter formal: Conclusiones 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 22, 25, 28, 31, 32 y 34.</p> <p>Una multa equivalente 144 (ciento cuarenta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecisiete, equivalente a \$10,517.76 (diez mil quinientos diecisiete pesos 76/100 M.N.)</p>	<p>Emitir a la brevedad posible un nuevo acuerdo, en el cual se ajuste la cantidad correspondiente a las faltas formales respecto de la conclusión 2, en parte, así como en la totalidad de lo estudiado las conclusiones 3, 6, 9, 11, 14 y 31, para ser cuantificadas con la Unidad de Medida y Actualización correspondiente al año dos mil dieciséis.</p>

8. DETERMINACIÓN EN CUMPLIMIENTO.

En cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Consejo General procede a acatar la sentencia SM-RAP-75/2018, en los términos siguientes:

17.2.8 Comité Ejecutivo Estatal de Coahuila

(...)

- a) 16 faltas de carácter formal: Conclusiones **2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 22, 25, 28, 31, 32 y 34.**

(...)

a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias de carácter formal infractoras de los artículos 33 numeral 1, inciso g), 39 numeral 3, inciso k) y 6, 41, 46 numeral 1, 96, numeral 1, 102 numeral 3, 126, 129 numeral 1, 131 numeral 1, 132 numerales 1 y 2, 133, 172, 173, 205, 255, 256 numeral 1 y 257 numeral 1, incisos h), n), s), r) y t), del Reglamento de Fiscalización: conclusiones **2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 22, 25, 28, 31, 32 y 34.**

(...)

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

(...)

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las circunstancias en que fueron cometidas, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹

¹ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia,

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, (ahora Unidades de Medidas y Actualización), es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el partido político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

No pasa desapercibido para esta autoridad electoral, que el órgano jurisdiccional al realizar una revocación parcial por cuanto hace a las conclusiones **2**, en parte, **3**, **6**, **9**, **11**, **14** y **31**, deja intocadas las sanciones impuestas por cuanto hace a las conclusiones **4**, **7**, **13**, **15**, **22**, **25**, **28**, **32** y **34**.

Lo anterior conlleva la necesidad de identificar, en primer término, el valor unitario que se fijó por conclusión sancionatoria; hecho lo anterior, ajustar la sanción que derive de las conclusiones materia del mandato jurisdiccional.

En ese sentido se tiene que, por cuanto hace a la cantidad **16** conclusiones formales, esta autoridad electoral fijó como sanción primigenia la cantidad de **144** Unidades de Medida y Actualización; de modo que, si dicha cantidad global se divide entre el número de conclusiones sancionatorias, se obtiene el cociente de **9** Unidades de Medida y Actualización por conclusión sancionatoria.

Ahora bien, 9 de aquellas 16 conclusiones sancionatorias formales, quedaron intocadas en términos de la sentencia SM-RAP-75/2017, de modo que el criterio de sanción sostenido en la resolución INE/CG520/2017 no ha lugar a modificarse.

En consecuencia, este Consejo General deja intocada, en la parte alícuota, la sanción impuesta derivada de las conclusiones **4**, **7**, **13**, **15**, **22**, **25**, **28**, **32** y **34**, por lo que la sanción que se debe imponer al instituto político es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y

la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Procedimientos Electorales, consistente en una multa equivalente a **81 (ochenta y un) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecisiete**, equivalentes a **\$6,114.69 (seis mil ciento catorce pesos 69/100 M.N.)**.

Llegados a este punto, y por cuando hace al resto de las conclusiones sancionatorias formales, la autoridad judicial ordenó reajustar el monto de la sanción en atención al valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el año dos mil dieciséis, esto es, \$73.04 (setenta y tres pesos 04/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción derivada de las conclusiones **2, 3, 6, 9, 11, 14 y 31**; que se debe imponer al instituto político es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa equivalente a **63 (sesenta y tres) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil dieciséis**, equivalente a **\$4,601.52 (cuatro mil seiscientos un pesos 52/100 M.N.)**

9. Que la sanción originalmente impuesta al Comité Ejecutivo Estatal de Coahuila del Partido de la Revolución Democrática, en la resolución **INE/CG520/2017**, consistió en:

Sanciones en Resolución INE/CG520/2017	Modificación	Sanción en Acatamiento al SM-RAP-75/2017
<p>NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 17.2.8 correspondiente al Comité Ejecutivo Estatal de Coahuila (...)</p> <p>a) 16 faltas de carácter formal: Conclusiones 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 22, 25, 28, 31, 32 y 34.</p> <p>Una multa equivalente 144 (ciento cuarenta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecisiete, equivalente a \$10,870.56 (diez mil ochocientos setenta pesos 56/100 M.N.).</p>	<p>Se ajusta la sanción con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización en el ejercicio 2016, respecto de las conclusiones 2 en parte, 3, 6, 9, 11, 14 y 31, dejando intocadas las demás conclusiones.</p>	<p>NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 17.2.8 correspondiente al Comité Ejecutivo Estatal de Coahuila (...)</p> <p>a) 16 faltas de carácter formal: Conclusiones 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 22, 25, 28, 31, 32 y 34.</p> <p>Por cuanto hace a las conclusiones 4, 7, 13, 15, 22, 25, 28, 32 y 34 una multa equivalente 81 (ochenta y un) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecisiete, equivalentes a \$6,114.69 (seis mil ciento catorce pesos 69/100 M.N.).</p>

Sanciones en Resolución INE/CG520/2017	Modificación	Sanción en Acatamiento al SM-RAP-75/2017
		Por cuanto hace a las conclusiones 2, 3, 6, 9, 11, 14 y 31 una multa equivalente a 63 (sesenta y tres) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil dieciséis, equivalente a \$4,601.52 (cuatro mil seiscientos un pesos 52/100 M.N

10. Que, de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el presente Acuerdo, se modifica el Resolutivo **NOVENO, inciso a)**, de la Resolución **INE/CG520/2017**, por tanto se impone al **Partido de la Revolución Democrática**, la sanción siguiente:

(...)

NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando **17.2.8** correspondiente al **Comité Ejecutivo Estatal de Coahuila** (...):

- a) **16** faltas de carácter formal: Conclusiones **2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 22, 25, 28, 31, 32 y 34**.

Por cuanto hace a las conclusiones **4, 7, 13, 15, 22, 25, 28, 32 y 34** una multa equivalente **81 (ochenta y un)** Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecisiete, equivalentes a **\$6,114.69 (seis mil ciento catorce pesos 69/100 M.N.)**.

Por cuanto hace a las conclusiones **2, 3, 6, 9, 11, 14 y 31** una multa equivalente a **63 (sesenta y tres)** Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil dieciséis, equivalente a **\$4,601.52 (cuatro mil seiscientos un pesos 52/100 M.N**

(...)

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

A C U E R D A

PRIMERO. Se **modifica el Acuerdo INE/CG158/2018**, aprobado en sesión extraordinaria, celebrada el catorce de marzo de dos mil dieciocho, misma que modifica la Resolución primigenia **INE/CG520/2017**, aprobada en sesión ordinaria, celebrada el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, respecto de la revisión a los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del **Partido de la Revolución Democrática**, correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis, en los términos precisados en los Considerandos **8 y 10** del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Infórmese a la **H. Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación**, dentro de las **veinticuatro horas** siguientes a la aprobación del presente, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SM-RAP-75/2017**.

TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, por su conducto, remita el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al Organismo Público Local Electoral en Coahuila, y dicho organismo, a su vez, este en posibilidad de notificar al sujeto interesado a la brevedad posible, por lo que se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes después de haberlas practicado.

CUARTO. Hágase del conocimiento al Organismo Público Local Electoral de Coahuila, a efecto que todas la sanción determinada sea pagada en dicho Organismo Público Local Electoral, la cual en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el que el presente Acuerdo haya causado estado; y los recursos obtenidos de la sanción económica impuesta en este Acuerdo, serán destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables.

QUINTO. Se solicita al Organismo Público Local Electoral de Coahuila, que informe al Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de la sanción impuesta en el presente Acuerdo.

SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Ahora, someto a su consideración, señoras y señores Consejeros Electorales, los Proyectos de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificados en el orden del día como los apartados 9.8, 9.9, 9.25 y 9.28. _____
Quienes están a favor sírvanse manifestarlo. _____
9 votos. _____
¿En contra? _____
2 votos. _____
Aprobados por 9 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles). _____
(Texto de los Acuerdos aprobados INE/CG1283/2018, INE/CG1284/2018, INE/CG1285/2018 e INE/CG1286/2018) Ptos. 9.8, 9.9, 9.25 y 9.28 _____

INE/CG1283/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SCM-RAP-77/2018, INTERPUESTO POR MOVIMIENTO CIUDADANO, EN CONTRA DEL DICTAMEN CONSOLIDADO IDENTIFICADO CON CLAVE NÚMERO INE/CG1165/2018, RELATIVO A LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS Y LOS CANDIDATOS A LA GUBERNATURA, DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL FEDERAL-LOCAL ORDINARIO 2017-2018 EN PUEBLA

A N T E C E D E N T E S

I. En sesión ordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen Consolidado **INE/CG1165/2018** relativo a la revisión de los informes de ingresos y gastos de las y los candidatos a la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos correspondientes al Proceso Electoral Federal-local ordinario 2017-2018 y la Resolución, **INE/CG1166/2018** respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de gobernador, diputados y ayuntamientos correspondientes al Proceso Electoral Federal-local ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla.

II. Recurso de apelación. Inconforme con lo anterior, el día catorce de agosto de dos mil dieciocho, Movimiento Ciudadano interpuso recurso de apelación para controvertir lo determinado en el Acuerdo INE/CG1165/2018.

III. El diecinueve de agosto de dos mil dieciocho, la Sala Superior recibió las constancias correspondientes, y el mismo día, lo reencauzó a la Sala Regional de la Ciudad de México.

IV. El veintidós de agosto de dos mil dieciocho, la Sala Regional Ciudad de México recibió la documentación del recurso antes referido, ordenando integrar el expediente **SCM-RAP-77/2018**, y turnarlo a la ponencia de la Magistrada María Guadalupe Silva Rojas.

V. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso referido en sesión pública celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, determinando en su Resolutivo ÚNICO, lo que se transcribe a continuación:

***“ÚNICO.** Revocar parcialmente el acto impugnado en lo que fue materia de impugnación, para los efectos precisados en la presente Resolución.*

Lo anterior, a efecto de que la autoridad responsable en un plazo de (10) días naturales contados a partir de la notificación de la resolución, exponga las consideraciones debidamente fundadas y motivadas que la llevaron al estatus de fiscalización del candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de La Fragua en el estado de Puebla, el C. Raúl Pineda Raygoza.

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base II, primero y penúltimo párrafo de la CPEUM, la Ley garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y en las campañas electorales.
2. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base IV, de la CPEUM, manda que la Ley establecerá los plazos para la realización de los procesos partidistas de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales.
3. Que en el artículo 6, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece que el Instituto Nacional Electoral

dispondrá lo necesario para el cumplimiento de lo dispuesto en las leyes generales.

4. Que el artículo 42, numerales 2 y 6 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, prevé la creación de la Comisión de Fiscalización, la cual funcionará permanentemente y se integrará exclusivamente por Consejeros Electorales designados por el Consejo General, y contará con un Secretario Técnico que será el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización.
5. Que el inciso jj) del artículo 44 del mismo ordenamiento jurídico, establece que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dictará los Acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y las demás señaladas en la Ley.
6. Que en términos de lo dispuesto en el artículo 41, Base V, apartado B de la Constitución; 190 y 191 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es facultad del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitir Lineamientos específicos en materia de fiscalización, contabilidad, y registro de operaciones de los partidos políticos.
7. Que de acuerdo con el artículo 190, numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la fiscalización de los partidos políticos se realizará en los términos y conforme a los procedimientos previstos por la propia ley y de conformidad con las obligaciones previstas en la Ley General de Partidos Políticos; además la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General de este Instituto por conducto de la Comisión de Fiscalización.
8. Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 190 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por conducto de la Comisión de Fiscalización.
9. Que el artículo 192, numeral 1, incisos a) y d) de la Ley en cita, señala que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ejercerá las facultades de supervisión, seguimiento y control técnico y, en general, todos aquellos actos preparatorios a través de la Comisión de Fiscalización, la cual emitirá los

acuerdos generales y normas técnicas que se requieran para regular el registro contable de los partidos políticos y revisará las funciones y acciones realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización con la finalidad de garantizar la legalidad y certeza en los procesos de fiscalización.

10. Que una de las facultades de la Comisión de Fiscalización es delimitar los alcances de revisión de los informes a los que están obligados a presentar los partidos políticos, establecido en el artículo 192, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
11. Que el numeral 2 del artículo 192 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que, para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Fiscalización contará con la Unidad Técnica de Fiscalización.
12. Que de conformidad con el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización, es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de dichos institutos políticos.
13. Que el artículo 199, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que es atribución de la Unidad Técnica de Fiscalización auditar con plena independencia técnica los ingresos, gastos, documentación soporte y la contabilidad de los partidos políticos, así como los informes que están obligados a presentar.
14. Que el artículo 199, numeral 1, inciso b) de la de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que la Unidad Técnica de Fiscalización tendrá la facultad de elaborar y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización, los proyectos de Reglamento en materia de fiscalización y contabilidad, y los acuerdos que se requieran para el cumplimiento de sus funciones.
15. Que en términos de lo señalado en el artículo 199, numeral 1, incisos c) y g) de la Ley en comento, corresponde a la Unidad Técnica de Fiscalización vigilar que los recursos de los partidos políticos tengan origen lícito y se

apliquen exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos; así como presentar a la Comisión de Fiscalización los informes de resultados, dictámenes consolidados y proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los partidos.

16. Que el artículo 81 de la Ley General de Partidos Políticos, establece que los dictámenes y proyectos de resolución emitidos por la Unidad Técnica deberán contener como mínimo: a) El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes que hayan presentado los partidos políticos; b) En su caso, la mención de los errores o irregularidades encontrados en los mismos, y c) El señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los partidos políticos después de haberles notificado con ese fin.
17. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 296, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización podrá determinar la realización de verificaciones selectivas de la documentación comprobatoria, a partir de criterios objetivos emanados de las normas y procedimientos de auditoría y dichas verificaciones podrán ser totales o muestrales en uno o varios rubros.
18. En quinta sesión extraordinaria urgente celebrada el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete la Comisión de Fiscalización aprobó el Acuerdo CF/012/2017, mediante el cual se determinaron los alcances de revisión y se establecieron los Lineamientos para la realización de las visitas de verificación, monitoreo de anuncios espectaculares y demás propaganda colocada en la vía pública, diarios, revistas, otros medios impresos, internet y redes sociales derivado de la revisión de los informes de precampaña, apoyo ciudadano y campaña del Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 2017-2018, así como los procesos extraordinarios que se pudieran derivar de dicho proceso.
19. Que el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de Campaña, refiere a la totalidad de las campañas en las que participaron los sujetos obligados y que contendieron a algún cargo de elección popular mismo que es elaborado en cumplimiento a lo establecido en el artículo 81 de la Ley General de Partidos Políticos.
20. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 334 del Reglamento de Fiscalización, derivado de la revisión de los informes, la Unidad Técnica elaborará un Dictamen Consolidado de conformidad con lo establecido en el

artículo 81 ya referido; así como en lo establecido en el Boletín 7040 Exámenes sobre el Cumplimiento de Disposiciones Específicas de las Normas Internacionales de Auditoría.

- 21.** Que el Dictamen del partido “Nueva Alianza” se compone de los siguientes apartados:

06_NUAL

NUAL_OBS (Cedula de Observaciones)

6_NUAL (Informes y conclusiones de la revisión)

ANEXO I (Reporte de ingresos de campaña)

ANEXO II (Reporte de Gastos de campaña)

ANEXO II A (Reporte de Gastos no reportados en campaña)

ANEXOS_OBS (Anexos de las Observaciones de la Cedula)

- 22.** Que cada uno de los apartados que conforman el Dictamen del partido “Nueva Alianza”, se integra de las observaciones detectadas, las respuestas de los sujetos obligados y la conclusión de la autoridad electoral, considerando si estas fueron atendidas, no atendidas o quedaron sin efecto. La integración de cada una de las observaciones está debidamente identificada en los anexos que lo integran y que son parte del mismo Dictamen.

- 23.** Que los efectos de la sentencia SCM-RAP-77/2018 son:

“Lo procedente es revocar parcialmente, en lo que fue materia de impugnación y competencia de esta Sala Regional, el Dictamen Consolidado.

Con base en lo anterior, se ordena a la Autoridad Responsable, que en un plazo de (10) días naturales contados a partir de la notificación de esta Resolución, exponga las consideraciones, debidamente fundadas y motivadas, que la llevaron a la conclusión del estatus de fiscalización del Candidato.”

En virtud de lo anterior, en cumplimiento a la sentencia emitida en el expediente identificado como SCM-RAP-77/2018; con fundamento en lo previsto en los artículos 41, Bases II, penúltimo párrafo; y V, Apartados A, párrafos primero y segundo y B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 2; 35; 44, numeral 1, inciso j); 190, numeral 2; 192, numeral 1, incisos a), c) y d); 196, numeral 1; y 199 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se ha determinado emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se da cumplimiento a lo mandatado por la Sala Regional Ciudad de México en términos de lo dispuesto en el considerando 23 respecto del Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos y candidatos a la Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos correspondientes al Proceso Electoral Federal ordinario 2017-2018 en Puebla; identificado como INE/CG1165/2018, en particular en el apartado 06_NUAL.

En estricto cumplimiento a lo mandatado por la Sala Regional Ciudad de México se informa el estatus de fiscalización que guardan los informes de campaña presentados por el otrora candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de La Fragua en el estado de Puebla, el C. Raúl Pineda Raygoza.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 199, numeral 1, incisos c) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 296, numeral 2; y 334 del Reglamento de Fiscalización; en el acuerdo CF/012/2017; así como en lo establecido en el Boletín 7040 Exámenes sobre el Cumplimiento de Disposiciones Específicas de las Normas Internacionales de Auditoría, se determina que de la revisión realizada, aplicando pruebas selectivas a los ingresos y gastos directos del candidato Raúl Pineda Raygoza; así como a los centralizados del partido Nueva Alianza que lo postuló y que le generaron algún beneficio, se arribó a lo siguiente:

I. Informes presentados

El candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de La Fragua en el estado de Puebla, el C. Raúl Pineda Raygoza presentó en tiempo y forma 4 informes de campaña correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, en los siguientes términos:

Periodo	Tipo	Fecha de presentación
1	Normal	1-junio-2018
1	Corrección	17-junio-2018

Periodo	Tipo	Fecha de presentación
2	Normal	1-julio-2018
2	Corrección	16-julio-2018

II. Ingresos y gastos reportados.

En el Dictamen Consolidado de Raúl Pineda Raygoza, se da cuenta de los ingresos y gastos reportados en sus informes, mismos que se muestran a continuación:

Candidato	Total de ingresos reportados	Total de gastos reportados
Raúl Pineda Raygoza	112,957.81	112,957.81

El detalle de los ingresos y gastos no reportados se observa en los Anexos I y II del Dictamen.

De la revisión efectuada a la documentación soporte de los ingresos y gastos presentada en el SIF por parte del partido Nueva Alianza en relación con el C. Raúl Pineda Raygoza, se determinó que **la documentación cumplió con lo dispuesto en la normatividad aplicable**, con excepción de lo señalado a continuación, lo cual ya fue materia de análisis y sanción por parte de la autoridad fiscalizadora en la resolución atinente:

Dictamen	Carpeta	Periodo	Observación	Rubro	Página	Anexo	Estatus	Anexo	Análisis	Falta Concreta	Artículo que incumplió
6_NUAL	6_NUAL	1	El Sujeto obligado incumplió en el registro de 963 eventos como lo establece la normativa.	Eventos	9	Anexo 8-P1	No atendida	Anexo 8-P1	No atendida Del escrito de respuesta a la observación y de la revisión al SIF, se verificó que el sujeto obligado, presentó la agenda de actos públicos, sin embargo, omitió reportar eventos en tiempo como lo establece la normativa, por tal razón la observación no quedó atendida . Véase en el Anexo 8_P1.	Registro extemporáneo de eventos.	143 Bis, del RF.
6_NUAL	6_NUAL	1	El sujeto obligado reportó 577 eventos previamente a su realización; sin embargo, estos no cumplieron con la antelación de 7 días que establece la normativa.	Eventos	9	Anexo 9-P1	No atendida	Anexo 9-P1	No atendida El sujeto obligado, presentó la agenda de eventos, sin embargo, omitió reportar eventos en tiempo como lo establece la normativa, por tal razón la observación no quedó atendida . Véase en el Anexo 9_P1.	Registro extemporáneo de eventos.	143 Bis del RF.

Dictamen	Carpeta	Periodo	Observación	Rubro	Página	Anexo	Estatus	Anexo	Análisis	Falta Concreta	Artículo que incumplió
6_NUAL	6_NUAL	2	El sujeto obligado informó de manera extemporánea 672 eventos de la agenda de actos públicos, de manera posterior a su celebración y 131 eventos el mismo día.	Eventos	38	Anexo 22-P2	No atendida	Anexo 22-P2	No atendida Con motivo de la respuesta del sujeto obligado y de la revisión efectuada en el sistema SIF, se observó que presentó la agenda de actos públicos, sin embargo, omitió reportar eventos en tiempo como lo establece la normativa, por tal razón la observación no quedó atendida . Véase ANEXO 22_P2 del presente Dictamen.	Eventos registrados extemporáneamente, de manera posterior a su celebración.	143 Bis del RF.
6_NUAL	6_NUAL	2	El sujeto obligado informó de manera extemporánea 650 eventos de la agenda de actos públicos, de manera previa a su celebración.	Eventos	38-39	Anexo 23-P2	No atendida	Anexo 23-P2	No atendida Con motivo de la respuesta del sujeto obligado y del análisis al SIF, se observó que el sujeto obligado reportó eventos en la agenda de actos públicos, sin embargo, estos no cumplieron con la antelación de siete días que establece la normativa; por tal la razón, la observación quedó no atendida. Véase ANEXO 23_P2 del presente Dictamen.	Eventos registrados extemporáneamente, de manera previa a su celebración.	143 Bis del RF

III. Ingresos y gastos según auditoría

Los ingresos y gastos dictaminados, una vez que la coalición dio respuesta a los oficios de errores y omisiones correspondientes, se detallan a continuación:

Candidato	Total de ingresos reportados	Ingresos no reportados	Total de Ingresos	Total de gastos reportados	Gastos Determinados por la UTF	Total de gastos A	Tope de gastos B	Diferencia C=A-B
Raúl Pineda Raygoza	\$112,957.81	0.00	\$112,957.81	\$112,957.81	\$0.00	\$112,957.81	\$143,564.81	-\$30,607.00

El detalle de los ingresos y gastos no reportados se observa en los Anexos I, II y II Bis del Dictamen.

De anterior se advierte que el C. Raúl Pineda Raygoza no rebasó el tope de gastos de campaña correspondiente.

SEGUNDO. Infórmese a la **Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación**, dentro de las **veinticuatro horas** siguientes a la aprobación del presente documento con el que se da cumplimiento a la sentencia emitida en el expediente **SCM-RAP-77/2018**.

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en la página del Instituto Nacional Electoral.

INE/CG1284/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SCM-RAP-83/2018, INTERPUESTO POR MOVIMIENTO CIUDADANO, EN CONTRA DEL DICTAMEN CONSOLIDADO IDENTIFICADO CON CLAVE NÚMERO INE/CG1165/2018, RELATIVO A LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS Y LOS CANDIDATOS A LA GUBERNATURA, DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL FEDERAL-LOCAL ORDINARIO 2017-2018 EN PUEBLA

A N T E C E D E N T E S

I. El (6) seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen Consolidado **INE/CG1165/2018** relativo a la revisión de los informes de ingresos y gastos de las y los candidatos a la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos correspondientes al Proceso Electoral Federal-local ordinario 2017-2018 y la Resolución, **INE/CG1166/2018** respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de gobernador, diputados y ayuntamientos correspondientes al Proceso Electoral Federal-local ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla.

II. Recurso de apelación. Inconforme con lo anterior, el catorce de agosto, el Recurrente - por conducto de su representante propietario ante el Consejo General – interpuso recurso de apelación para controvertir el Dictamen Consolidado.

III. El diecinueve de agosto de dos mil dieciocho, la Sala Superior recibió la demanda y demás constancias, y el mismo día, lo reencauzó a la Sala Regional de la Ciudad de México.

IV. El veintidós de agosto de dos mil dieciocho, la Sala Regional de la Ciudad de México recibió la documentación del recurso antes referido, ordenando integrar el expediente **SCM-RAP-83/2018** que fue turnado a la ponencia a cargo de la Magistrada María Guadalupe Silva Rojas.

V. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso referido en sesión pública celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, determinando en su Resolutivo ÚNICO, lo que se transcribe a continuación:

***“ÚNICO.** Revocar parcialmente el acto impugnado en lo que fue materia de impugnación, para los efectos precisados en la presente Resolución.*

Lo anterior, a efecto de que la autoridad responsable en un plazo de (10) días naturales contados a partir de la notificación de la resolución, exponga las consideraciones debidamente fundadas y motivadas que la llevaron al estatus de fiscalización del candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Olintla, Puebla, el C. Miguel Juan Sánchez.

C O N S I D E R A N D O

1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base II, primero y penúltimo párrafo de la CPEUM, la Ley garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y en las campañas electorales.
2. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base IV, de la CPEUM, manda que la Ley establecerá los plazos para la realización de los procesos partidistas de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales.

3. Que en el artículo 6, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece que el Instituto Nacional Electoral dispondrá lo necesario para el cumplimiento de lo dispuesto en las leyes generales.
4. Que el artículo 42, numerales 2 y 6 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, prevé la creación de la Comisión de Fiscalización, la cual funcionará permanentemente y se integrará exclusivamente por Consejeros Electorales designados por el Consejo General, y contará con un Secretario Técnico que será el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización.
5. Que el inciso jj) del artículo 44 del mismo ordenamiento jurídico, establece que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dictará los Acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y las demás señaladas en la Ley.
6. Que en términos de lo dispuesto en el artículo 41, Base V, apartado B de la Constitución; 190 y 191 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es facultad del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitir Lineamientos específicos en materia de fiscalización, contabilidad, y registro de operaciones de los partidos políticos.
7. Que de acuerdo con el artículo 190, numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la fiscalización de los partidos políticos se realizará en los términos y conforme a los procedimientos previstos por la propia ley y de conformidad con las obligaciones previstas en la Ley General de Partidos Políticos; además la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General de este Instituto por conducto de la Comisión de Fiscalización.
8. Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 190 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por conducto de la Comisión de Fiscalización.

9. Que el artículo 192, numeral 1, incisos a) y d) de la Ley en cita, señala que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ejercerá las facultades de supervisión, seguimiento y control técnico y, en general, todos aquellos actos preparatorios a través de la Comisión de Fiscalización, la cual emitirá los acuerdos generales y normas técnicas que se requieran para regular el registro contable de los partidos políticos y revisará las funciones y acciones realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización con la finalidad de garantizar la legalidad y certeza en los procesos de fiscalización.
10. Que una de las facultades de la Comisión de Fiscalización es delimitar los alcances de revisión de los informes a los que están obligados a presentar los partidos políticos, establecido en el artículo 192, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
11. Que el numeral 2 del artículo 192 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que, para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Fiscalización contará con la Unidad Técnica de Fiscalización.
12. Que de conformidad con el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización, es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de dichos institutos políticos.
13. Que el artículo 199, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que es atribución de la Unidad Técnica de Fiscalización auditar con plena independencia técnica los ingresos, gastos, documentación soporte y la contabilidad de los partidos políticos, así como los informes que están obligados a presentar.
14. Que el artículo 199, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que la Unidad Técnica de Fiscalización tendrá la facultad de elaborar y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización, los proyectos de Reglamento en materia de fiscalización y contabilidad, y los acuerdos que se requieran para el cumplimiento de sus funciones.

15. Que en términos de lo señalado en el artículo 199, numeral 1, incisos c) y g) de la Ley en comento, corresponde a la Unidad Técnica de Fiscalización vigilar que los recursos de los partidos políticos tengan origen lícito y se apliquen exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos; así como presentar a la Comisión de Fiscalización los informes de resultados, dictámenes consolidados y proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los partidos.
16. Que el artículo 81 de la Ley General de Partidos Políticos, establece que los dictámenes y proyectos de resolución emitidos por la Unidad Técnica deberán contener como mínimo: a) El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes que hayan presentado los partidos políticos; b) En su caso, la mención de los errores o irregularidades encontrados en los mismos, y c) El señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los partidos políticos después de haberles notificado con ese fin.
17. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 296, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización podrá determinar la realización de verificaciones selectivas de la documentación comprobatoria, a partir de criterios objetivos emanados de las normas y procedimientos de auditoría y dichas verificaciones podrán ser totales o muestrales en uno o varios rubros.
18. En quinta sesión extraordinaria urgente celebrada el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete la Comisión de Fiscalización aprobó el Acuerdo CF/012/2017, mediante el cual se determinaron los alcances de revisión y se establecieron los Lineamientos para la realización de las visitas de verificación, monitoreo de anuncios espectaculares y demás propaganda colocada en la vía pública, diarios, revistas, otros medios impresos, internet y redes sociales derivado de la revisión de los informes de precampaña, apoyo ciudadano y campaña del Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 2017-2018, así como los procesos extraordinarios que se pudieran derivar de dicho proceso.
19. Que el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de Campaña, refiere a la totalidad de las campañas en las que participaron los sujetos obligados y que contendieron a algún cargo de elección popular mismo que es elaborado en cumplimiento a lo establecido en el artículo 81 de la Ley General de Partidos Políticos.

20. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 334 del Reglamento de Fiscalización, derivado de la revisión de los informes, la Unidad Técnica elaborará un Dictamen Consolidado de conformidad con lo establecido en el artículo 81 ya referido; así como en lo establecido en el Boletín 7040 Exámenes sobre el Cumplimiento de Disposiciones Específicas de las Normas Internacionales de Auditoría.

21. Que el Dictamen del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se compone de los siguientes apartados:

2_PRI

2_PRI (Informes y conclusiones de la revisión)

Anexo I (Ingresos)

Anexo II (Gastos)

Anexo II – A (Gastos no reportados)

PRI_OBS (Observaciones)

ANEXOS_OBS (Anexos del Dictamen)

22. Que cada uno de los apartados que conforman el Dictamen del Partido Revolucionario Institucional, se integra de las observaciones detectadas, las respuestas de los sujetos obligados y la conclusión de la autoridad electoral, considerando si estas fueron atendidas, no atendidas o quedaron sin efecto. La integración de cada una de las observaciones está debidamente identificada en los anexos que lo integran y que son parte del mismo Dictamen.

23. Que los efectos de la sentencia SCM-RAP-83/2018 son:

“Lo procedente es renovar parcialmente, en lo que fue materia de impugnación y competencia de esta Sala Regional, el Dictamen Consolidado.

Debe quedar establecido en el Dictamen Consolidado hace referencia a las irregularidades detectadas con motivo de la revisión de los informes de campaña presentados, entre otros por el Partido, de tal modo que implícitamente se tiene que algunos de los gastos reportados por los institutos políticos, candidatos o candidatas que no aparecen en éste, es porque, a juicio de la Autoridad Responsable, cumplieron con las obligaciones en la materia.

Con base en lo anterior, se ordena a la Autoridad Responsable, que en un plazo de (10) días naturales contados a partir de la notificación de esta Resolución, exponga las consideraciones, debidamente fundadas y motivadas, que la llevaron a la conclusión del estatus de fiscalización del Candidato.”

En virtud de lo anterior, en cumplimiento a la sentencia emitida en el expediente identificado como SCM-RAP-83/2018; con fundamento en lo previsto en los artículos 41, Bases II, penúltimo párrafo; y V, Apartados A, párrafos primero y segundo y B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 2; 35; 44, numeral 1, inciso j); 190, numeral 2; 192, numeral 1, incisos a), c) y d); 196, numeral 1; y 199 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se ha determinado emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se da cumplimiento a lo mandado por la Sala Regional Ciudad de México en términos de lo dispuesto en el considerando 23 respecto del Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos y candidatos independientes a los cargos de Gobernador, Diputados y Presidentes Municipales del Proceso Electoral Local 2017-2018; identificado como INE/CG1165/2018, en particular en el apartado 2_PRI.

En estricto cumplimiento a lo mandado por la Sala Regional Ciudad de México se informa el estatus de fiscalización que guardan los informes de campaña presentados por el candidato a Presidente Municipal de Olintla en el estado de Puebla, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, el C. Miguel Juan Sánchez.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 199, numeral 1, incisos c) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 296, numeral 2; y 334 del Reglamento de Fiscalización; en el acuerdo CF/012/2017; así como en lo establecido en el Boletín 7040 Exámenes sobre el Cumplimiento de Disposiciones Específicas de las Normas Internacionales de Auditoría, se determina que, de la revisión realizada, aplicando pruebas selectivas a los ingresos y gastos directos del candidato C. Miguel Juan Sánchez; así como a los centralizados del Partido Revolucionario Institucional que lo postuló y que le generaron algún beneficio, se arribó a lo siguiente:

I. Informes presentados

El candidato a Presidente Municipal, el C. Miguel Juan Sánchez presentó en tiempo y forma 4 informes de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018, en los siguientes términos:

Periodo	Tipo	Fecha de presentación
1	Normal	31-mayo-2018
1	Corrección	14-junio-2018
2	Normal	30-junio-2018
2	Corrección	15-julio-2018

II. Ingresos y gastos reportados.

En el Dictamen Consolidado del C. Miguel Juan Sánchez, se da cuenta de los ingresos y gastos reportados en sus informes, mismos que se muestran a continuación:

Candidato	Total de ingresos reportados	Total de gastos reportados
Miguel Juan Sánchez	12,320.87	12,320.87

El detalle de los ingresos y gastos no reportados se observa en los Anexos I y II del Dictamen.

De la revisión efectuada a la documentación soporte de los ingresos y gastos presentada en el SIF por parte del Partido Revolucionario Institucional en relación con el C. Miguel Juan Sánchez, se determinó que **la documentación cumplió con lo dispuesto en la normatividad aplicable**, con excepción de lo señalado a continuación, lo cual ya fue materia de análisis y sanción por parte de la autoridad fiscalizadora en la resolución atinente:

Dictamen	Carpeta	Periodo	Observación	Rubro	Página	Anexo	Estatus	Anexo	Análisis	Falta Concreta	Artículo que incumplió
2_PRI	2_PRI	2	Jornada Electoral	Jornada Electoral	57	Anexo JE-PRI	No atendida	Anexo JE-PRI	No Atendida La respuesta del sujeto obligado, se consideró satisfactoria, toda vez que del análisis al Subsistema de Registro de Representantes Generales y de Casilla, al SIJE y al Sistema Integral de Fiscalización, se determinó lo siguiente: En relación a las referencias 1, 2, 4 y 5 de la columna Referencia para Dictamen del Anexo JE PRI del presente Dictamen, la observación quedó atendida.		

Dictamen	Carpeta	Periodo	Observación	Rubro	Página	Anexo	Estatus	Anexo	Análisis	Falta Concreta	Artículo que incumplió
									Respecto los casos referenciados con 3 corresponden a casillas en las cuales, si hubo representantes y no presentaron recibo de gratuidad o comprobante de remuneración con el que esta autoridad pudiera acreditar la gratuidad o el monto remunerado, por lo que de conformidad con el artículo 216 Bis, del RF, en relación con el Acuerdo INE/CG167/18, se procedió a realizar la cuantificación por el número de representante que fueron acreditados por el partido político y que estuvieron presentes de acuerdo al SIJE, con base en la matriz que se adjunta al presente Dictamen. El costo determinado al sujeto obligado que se aplicó al número de representante que estuvieron presentes en las casillas observadas en el estado de Puebla, el cual corresponde a 10,452 representantes y una vez aplicado el costo obtenido de la citada matriz de precios arroja un monto de gasto no reportado menor a 1, el cual se prorrateó entre los candidatos susceptibles de ser votados en cada casilla, el cual se detalla en el Anexo JE_PRI.		

III. Ingresos y gastos según auditoria

Los ingresos y gastos dictaminados, una vez que la coalición dio respuesta a los oficios de errores y omisiones correspondientes, se detallan a continuación:

Candidato	Total de ingresos reportados	Ingresos no reportados	Total de Ingresos	Total de gastos reportados	Gastos Determinados por la UTF	Total de gastos A	Tope de gastos B	Diferencia C=A-B
Miguel Juan Sánchez	\$12,320.87	0.00	\$12,320.87	\$12,320.87	\$5.13	\$12,326.00	\$140,992.07	-\$128,666.07

De anterior se advierte que el C. Miguel Juan Sánchez no rebasó el tope de gastos de campaña correspondiente.

SEGUNDO. Infórmese a la **Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación**, dentro de las **veinticuatro horas** siguientes a la aprobación del presente documento con el que se da cumplimiento a la sentencia emitida en el expediente **SCM-RAP-83/2018**.

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en la página del Instituto Nacional Electoral.

INE/CG1285/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA REGIONAL CIUDAD DE MEXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SCM-RAP-82/2018, INTERPUESTO POR MOVIMIENTO CIUDADANO, EN CONTRA DEL DICTAMEN CONSOLIDADO IDENTIFICADO CON CLAVE NÚMERO INE/CG1165/2018, RELATIVO A LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS Y LOS CANDIDATOS A LA GUBERNATURA, DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL FEDERAL-LOCAL ORDINARIO 2017-2018 EN PUEBLA

A N T E C E D E N T E S

I. El (6) seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen Consolidado **INE/CG1165/2018** relativo a la revisión de los informes de ingresos y gastos de las y los candidatos a la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos correspondientes al Proceso Electoral Federal-local ordinario 2017-2018 y la Resolución, **INE/CG1166/2018** respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de gobernador, diputados y ayuntamientos correspondientes al Proceso Electoral Federal-local ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla.

II. Recurso de apelación. Inconforme con lo anterior, el catorce de agosto, el Recurrente - por conducto de su representante propietario ante el Consejo General – interpuso recurso de apelación para controvertir el Dictamen Consolidado.

III. El diecinueve de agosto de dos mil dieciocho, la Sala Superior recibió la demanda y demás constancias, y el mismo día, lo reencauzó a la Sala Regional de la Ciudad de México.

IV. El veintidós de agosto de dos mil dieciocho, la Sala Regional de la Ciudad de México recibió la documentación del recurso antes referido, ordenando integrar el expediente **SCM-RAP-82/2018** que fue turnado a la ponencia a cargo del Magistrado Héctor Romero Bolaños.

V. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso referido en sesión pública celebrada el día seis de septiembre de dos mil dieciocho, determinando en su Resolutivo ÚNICO, lo que se transcribe a continuación:

“ÚNICO. Se revoca el Dictamen consolidado en la parte que fue motivo de controversia.”

Lo anterior, a efecto de que la autoridad responsable en un plazo de (10) días naturales contados a partir de la notificación de la resolución, exponga las consideraciones debidamente fundadas y motivadas que la llevaron al estatus de fiscalización del candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Francisco Z. Mena, Puebla, el C. Pascual Morales Martínez.

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base II, primero y penúltimo párrafo de la CPEUM, la Ley garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y en las campañas electorales.
2. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base IV, de la CPEUM, manda que la Ley establecerá los plazos para la realización de los procesos partidistas de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales.
3. Que en el artículo 6, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece que el Instituto Nacional Electoral

dispondrá lo necesario para el cumplimiento de lo dispuesto en las leyes generales.

4. Que el artículo 42, numerales 2 y 6 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, prevé la creación de la Comisión de Fiscalización, la cual funcionará permanentemente y se integrará exclusivamente por Consejeros Electorales designados por el Consejo General, y contará con un Secretario Técnico que será el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización.
5. Que el inciso jj) del artículo 44 del mismo ordenamiento jurídico, establece que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dictará los Acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y las demás señaladas en la Ley.
6. Que en términos de lo dispuesto en el artículo 41, Base V, apartado B de la Constitución; 190 y 191 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es facultad del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitir Lineamientos específicos en materia de fiscalización, contabilidad, y registro de operaciones de los partidos políticos.
7. Que de acuerdo con el artículo 190, numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la fiscalización de los partidos políticos se realizará en los términos y conforme a los procedimientos previstos por la propia ley y de conformidad con las obligaciones previstas en la Ley General de Partidos Políticos; además la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General de este Instituto por conducto de la Comisión de Fiscalización.
8. Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 190 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por conducto de la Comisión de Fiscalización.
9. Que el artículo 192, numeral 1, incisos a) y d) de la Ley en cita, señala que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ejercerá las facultades de supervisión, seguimiento y control técnico y, en general, todos aquellos actos preparatorios a través de la Comisión de Fiscalización, la cual emitirá los

acuerdos generales y normas técnicas que se requieran para regular el registro contable de los partidos políticos y revisará las funciones y acciones realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización con la finalidad de garantizar la legalidad y certeza en los procesos de fiscalización.

10. Que una de las facultades de la Comisión de Fiscalización es delimitar los alcances de revisión de los informes a los que están obligados a presentar los partidos políticos, establecido en el artículo 192, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
11. Que el numeral 2 del artículo 192 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que, para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Fiscalización contará con la Unidad Técnica de Fiscalización.
12. Que de conformidad con el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización, es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de dichos institutos políticos.
13. Que el artículo 199, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que es atribución de la Unidad Técnica de Fiscalización auditar con plena independencia técnica los ingresos, gastos, documentación soporte y la contabilidad de los partidos políticos, así como los informes que están obligados a presentar.
14. Que el artículo 199, numeral 1, inciso b) de la de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que la Unidad Técnica de Fiscalización tendrá la facultad de elaborar y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización, los proyectos de Reglamento en materia de fiscalización y contabilidad, y los acuerdos que se requieran para el cumplimiento de sus funciones.
15. Que en términos de lo señalado en el artículo 199, numeral 1, incisos c) y g) de la Ley en comento, corresponde a la Unidad Técnica de Fiscalización vigilar que los recursos de los partidos políticos tengan origen lícito y se

apliquen exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos; así como presentar a la Comisión de Fiscalización los informes de resultados, dictámenes consolidados y proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los partidos.

16. Que el artículo 81 de la Ley General de Partidos Políticos, establece que los dictámenes y proyectos de resolución emitidos por la Unidad Técnica deberán contener como mínimo: a) El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes que hayan presentado los partidos políticos; b) En su caso, la mención de los errores o irregularidades encontrados en los mismos, y c) El señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los partidos políticos después de haberles notificado con ese fin.
17. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 296, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización podrá determinar la realización de verificaciones selectivas de la documentación comprobatoria, a partir de criterios objetivos emanados de las normas y procedimientos de auditoría y dichas verificaciones podrán ser totales o muestrales en uno o varios rubros.
18. En quinta sesión extraordinaria urgente celebrada el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete la Comisión de Fiscalización aprobó el Acuerdo CF/012/2017, mediante el cual se determinaron los alcances de revisión y se establecieron los Lineamientos para la realización de las visitas de verificación, monitoreo de anuncios espectaculares y demás propaganda colocada en la vía pública, diarios, revistas, otros medios impresos, internet y redes sociales derivado de la revisión de los informes de precampaña, apoyo ciudadano y campaña del Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 2017-2018, así como los procesos extraordinarios que se pudieran derivar de dicho proceso.
19. Que el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de Campaña, refiere a la totalidad de las campañas en las que participaron los sujetos obligados y que contendieron a algún cargo de elección popular mismo que es elaborado en cumplimiento a lo establecido en el artículo 81 de la Ley General de Partidos Políticos.
20. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 334 del Reglamento de Fiscalización, derivado de la revisión de los informes, la Unidad Técnica elaborará un Dictamen Consolidado de conformidad con lo establecido en el

artículo 81 ya referido; así como en lo establecido en el Boletín 7040 Exámenes sobre el Cumplimiento de Disposiciones Específicas de las Normas Internacionales de Auditoría.

21. Que el Dictamen de la Coalición “Juntos Haremos Historia” (COA JHH) se compone de los siguientes apartados:

11_COA_JHH

PB_11_COA_JHH (Informes y conclusiones de la revisión)

Anexo_I y II (Ingresos y gastos)

Anexo II – A (Gastos no reportados)

PB_11_COA_JHH_OBS (Observaciones)

PB_ANEXOS_COA_JHH (Anexos del Dictamen)

22. Que cada uno de los apartados que conforman el Dictamen de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, se integra de las observaciones detectadas, las respuestas de los sujetos obligados y la conclusión de la autoridad electoral, considerando si estas fueron atendidas, no atendidas o quedaron sin efecto. La integración de cada una de las observaciones está debidamente identificada en los anexos que lo integran y que son parte del mismo Dictamen.

23. Que los efectos de la sentencia SCM-RAP-82/2018 son:

“Al resultar fundado el agravio relativo a la falta de fundamentación, motivación y certeza del Dictamen Consolidado, lo procedente es revocar, en lo que fue materia de impugnación, el Dictamen consolidado.

Debe quedar establecido que el dicho documento hace referencia a las irregularidades detectadas con motivo de la revisión de los informes de campaña presentados, entre otros por la Coalición, de tal modo que implícitamente se tiene que algunos de los gastos reportados por los institutos políticos, candidatos o candidatas que no aparecen en éste, es porque, a juicio de la Autoridad Responsable, cumplieron con las obligaciones en la materia.

Con base en lo anterior, se ordena a la Autoridad Responsable, que en un plazo de (10) días naturales contados a partir de la notificación de esta Resolución, exponga las consideraciones, debidamente fundadas y motivadas, que la llevaron a la conclusión del estatus de fiscalización del Candidato.”

En virtud de lo anterior, en cumplimiento a la sentencia emitida en el expediente identificado como SCM-RAP-82/2018; con fundamento en lo previsto en los artículos 41, Bases II, penúltimo párrafo; y V, Apartados A, párrafos primero y

segundo y B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 2; 35; 44, numeral 1, inciso j); 190, numeral 2; 192, numeral 1, incisos a), c) y d); 196, numeral 1; y 199 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se ha determinado emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se da cumplimiento a lo mandatado por la Sala Regional Ciudad de México en términos de lo dispuesto en el considerando 23 respecto del Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos y candidatos independientes a los cargos de Gobernador, Diputados y Presidentes Municipales del Proceso Electoral Local 2017-2018; identificado como INE/CG1165/2018, en particular en el apartado 11_COA_JHH.

En estricto cumplimiento a lo mandatado por la Sala Regional Ciudad de México se informa el estatus de fiscalización que guardan los informes de campaña presentados por el candidato a Presidente Municipal de Francisco Z. Mena en el estado de Puebla, postulado por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, el C. Pascual Morales Martínez.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 199, numeral 1, incisos c) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 296, numeral 2; y 334 del Reglamento de Fiscalización; en el acuerdo CF/012/2017; así como en lo establecido en el Boletín 7040 Exámenes sobre el Cumplimiento de Disposiciones Específicas de las Normas Internacionales de Auditoría, se determina que, de la revisión realizada, aplicando pruebas selectivas a los ingresos y gastos directos del candidato C. Pascual Morales Martínez; así como a los centralizados de la Coalición “Juntos Haremos Historia” que lo postuló y que le generaron algún beneficio, se arribó a lo siguiente:

I. Informes presentados

El candidato a Presidente Municipal, el C. Pascual Morales Martínez presentó en tiempo y forma 4 informes de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018, en los siguientes términos:

Periodo	Tipo	Fecha de presentación
1	Normal	01-junio-2018
1	Corrección	16-junio-2018
2	Normal	01-julio-2018
2	Corrección	17-julio-2018

II. Ingresos y gastos reportados.

En el Dictamen Consolidado del C. Pascual Morales Martínez, se da cuenta de los ingresos y gastos reportados en sus informes, mismos que se muestran a continuación:

Candidato	Total de ingresos reportados	Total de gastos reportados
Pascual Morales Martínez	46,815.96	46,818.10

El detalle de los ingresos y gastos no reportados se observa en los Anexos I y II del Dictamen.

De la revisión efectuada a la documentación soporte de los ingresos y gastos presentada en el SIF por parte de la Coalición “Juntos Haremos Historia” en relación con el C. Pascual Morales Martínez, se determinó que **la documentación cumplió con lo dispuesto en la normatividad aplicable**, con excepción de lo señalado a continuación, lo cual ya fue materia de análisis y sanción por parte de la autoridad fiscalizadora en la resolución atinente:

Dictamen	Carpeta	Periodo	Observación	Rubro	Página	Anexo	Estatus	Anexo	Análisis	Falta Concreta	Artículo que incumplió
11_COA_JHH	11_COA_JHH	1	El sujeto obligado informó de manera extemporánea 1963 eventos de la agenda de actos públicos de los 132 candidatos a presidentes municipales, de manera posterior a su celebración.	Eventos	42	Anexo 22-P1	No atendida	Anexo 22-P1	No atendida La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria, toda vez que aun y cuando manifiesta que documentan las fallas en el Sistema Integral de Fiscalización, en dichas evidencias no se logran validar falla alguna que impida el acceso al SIF, por tal razón la observación no quedó atendida . Véase ANEXO 22_P1	Eventos registrados extemporáneamente, el mismo día de su celebración	143 Bis del RF
11_COA_JHH	11_COA_JHH	1	El sujeto obligado informó de manera extemporánea 163 eventos de la agenda de actos públicos de los 81 candidatos a presidentes municipales, el mismo día de su realización.	Eventos	42	Anexo 23-P1	No atendida	Anexo 23-P1	No atendida La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria, toda vez que aun y cuando manifiesta que documentan las fallas en el Sistema Integral de Fiscalización, en dichas evidencias no se logran validar falla alguna que impida el acceso al SIF, por tal razón la observación no quedó atendida .	Eventos registrados extemporáneamente, de manera posterior a su celebración	143 Bis del RF

Dictamen	Carpeta	Periodo	Observación	Rubro	Página	Anexo	Estatus	Anexo	Análisis	Falta Concreta	Artículo que incumplió
									Véase ANEXO_23_P1		
11_COA_JHH	11_COA_JHH	1	El sujeto obligado informó de manera extemporánea 688 eventos de la agenda de actos públicos de 133 candidatos a presidentes municipales, de manera previa a su celebración, sin cumplir con los siete días previos a su realización.	Eventos	42-43	Anexo 24-P1	No atendida	Anexo 24-P1	No atendida La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria, toda vez que aun y cuando manifiesta que documentan las fallas en el Sistema Integral de Fiscalización, en dichas evidencias no se logran validar falla alguna que impida el acceso al SIF, por tal razón la observación no quedó atendida . Véase ANEXO_24_P1	Eventos registrados extemporáneamente, de manera previa a su celebración.	143 Bis del RF
11_COA_JHH	11_COA_JHH	1	El sujeto obligado omitió reportar la casa de campaña, así como los ingresos y gastos utilizados en la generación de la misma.	Casa de campaña	43	Anexo 25-P1	Seguimiento	Anexo 25-P1	Seguimiento Del análisis a la respuesta del sujeto obligado y de la revisión en el SIF, la observación se analizará en el ID 82 del segundo periodo de campaña. Véase ANEXO_25_P1		
11_COA_JHH	11_COA_JHH	1	El sujeto obligado registró transferencias en especie por concepto de propaganda y eventos, no obstante, omitió presentar la documentación soporte de la transferencia en especie por \$975,670.81.	Ingresos por Transferencias en especie	44	Anexo 26-P1 y 27-P1	No atendida	Anexo 26-P1 y 27-P1	No Atendida Derivado de la revisión a la documentación presentada en el SIF, en el periodo de corrección, se constató que el sujeto obligado omitió presentar muestras fotográficas y/o evidencias, recibos internos de aportación y kardex de los bienes transferidos, de los candidatos que se muestran en el ANEXO_26_P1 . Por tal razón la observación no quedó atendida . Véase ANEXO_27_P1	Ingreso no comprobado (omisión de presentación documental soporte)	96, numeral 1 y 223, numeral 6, inciso i) del RF
11_COA_JHH	11_COA_JHH	1	El sujeto obligado omitió presentar las conciliaciones bancarias.	Bancos	52	Anexo 32-P1	Seguimiento	Anexo 32-P1	Seguimiento Del análisis al SIF se verificó que el sujeto obligado presentó la totalidad de las conciliaciones bancarias en el segundo periodo de corrección. Lo anterior se detalla en el ANEXO_32_P1		
11_COA_JHH	11_COA_JHH	2	El sujeto obligado omitió reportar en el informe de campaña, las erogaciones por concepto de pago de representantes de casilla de Jornada Electoral por un monto de \$217,275.05	Jornada Electoral	129-133	Anexo II-A	Seguimiento	Anexo II-A	No atendida La respuesta del sujeto obligado, se consideró insatisfactoria, toda vez que del análisis al Subsistema de Registro de Representantes Generales y de Casilla, al SIJE y al Sistema Integral de Fiscalización, se determinó lo siguiente: En relación a las referencias 1, 2, 4 y 5 de la columna Referencia para Dictamen del Anexo JE_PT del presente Dictamen, la observación quedó atendida. Respecto los casos referenciados con 3 corresponden a casillas en las cuales, si hubo representantes y no presentaron recibo de gratuidad o comprobante de	Egreso no reportado	79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP; 127 del RF; y acuerdo INE/CG167 /2018

Dictamen	Carpeta	Periodo	Observación	Rubro	Página	Anexo	Estatus	Anexo	Análisis	Falta Concreta	Artículo que incumplió
									<p>remuneración con el que esta autoridad pudiera acreditar la gratuidad o el monto remunerado, por lo que de conformidad con el artículo 216 Bis, del RF, en relación con el Acuerdo INE/CG167/18, se procedió a realizar la cuantificación por el número de representante que fueron acreditados por el partido político y que estuvieron presentes de acuerdo al SIJE, con base en la matriz que se adjunta al presente Dictamen. El costo determinado al sujeto obligado que se aplicó al número de representante que estuvieron presentes en las casillas observadas en el estado de Puebla, el cual corresponde a 165 representantes y una vez aplicado el costo obtenido de la citada matriz de precios arroja un monto de gasto no reportado de \$217,275.05, el cual se prorrateó entre los candidatos susceptibles de ser votados en cada casilla, el cual se detalla en el Anexo JE_COA JHH.</p> <p>La determinación del costo se presenta en el Anexo II-A.</p>		

III. Ingresos y gastos según auditoria

Los ingresos y gastos dictaminados, una vez que la coalición dio respuesta a los oficios de errores y omisiones correspondientes, se detallan a continuación:

Candidato	Total de ingresos reportados	Ingresos no reportados	Total de Ingresos	Total de gastos reportados	Gastos Determinados por la UTF	Total de gastos A	Tope de gastos B	Diferencia C=A-B
Pascual Morales Martínez	\$46,815.96	0.00	\$46,815.96	\$46,815.96	\$2.14	\$46,818.10	\$151,240.17	-\$104,422.07

De anterior se advierte que el C. Pascual Morales Martínez no rebasó el tope de gastos de campaña correspondiente.

SEGUNDO. Infórmese a la **Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación**, dentro de las **veinticuatro horas** siguientes a la aprobación del presente documento con el que se da cumplimiento a la sentencia emitida en el expediente **SCM-RAP-82/2018**.

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en la página del Instituto Nacional Electoral.

INE/CG1286/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MEXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SCM-RAP-124/2018, INTERPUESTO POR PACTO SOCIAL DE INTEGRACIÓN, EN CONTRA DEL DICTAMEN CONSOLIDADO IDENTIFICADO CON CLAVE NÚMERO INE/CG1165/2018, RELATIVO A LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS Y LOS CANDIDATOS A LA GUBERNATURA, DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL FEDERAL-LOCAL ORDINARIO 2017-2018 EN PUEBLA

ANTECEDENTES

I. El (6) seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen Consolidado **INE/CG1165/2018** relativo a la revisión de los informes de ingresos y gastos de las y los candidatos a la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos correspondientes al Proceso Electoral Federal-local ordinario 2017-2018 y la Resolución, **INE/CG1166/2018** respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de gobernador, diputados y ayuntamientos correspondientes al Proceso Electoral Federal-local ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla.

II. Recurso de apelación. Inconforme con lo anterior, el quince de agosto, el Recurrente - por conducto de su representante propietario ante el Consejo General – interpuso recurso de apelación para controvertir el Dictamen Consolidado.

III. El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, la Sala Superior recibió la demanda y demás constancias, y el mismo día, lo reencauzó a la Sala Regional de la Ciudad de México.

IV. El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, la Sala Regional de la Ciudad de México recibió la documentación del recurso antes referido, ordenando integrar el

expediente **SCM-RAP-124/2018** que fue turnado a la ponencia a cargo de la Magistrada Héctor Romero Bolaños.

V. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso referido en sesión pública celebrada el seis de septiembre de dos mil dieciocho, determinando en su Resolutivo ÚNICO, lo que se transcribe a continuación:

***“ÚNICO.** Se revoca el Dictamen consolidado, en la parte que fue motivo de controversia para los efectos precisados en el último considerando de este fallo.*

Lo anterior, a efecto de que la autoridad responsable en un plazo de (10) días naturales contados a partir de la notificación de la resolución, exponga las consideraciones debidamente fundadas y motivadas que la llevaron al estatus de fiscalización de la candidata a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tepango de Rodríguez, Puebla, la C. Mireya González Pérez.

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base II, primero y penúltimo párrafo de la CPEUM, la Ley garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y en las campañas electorales.
2. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base IV, de la CPEUM, manda que la Ley establecerá los plazos para la realización de los procesos partidistas de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales.
3. Que en el artículo 6, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece que el Instituto Nacional Electoral dispondrá lo necesario para el cumplimiento de lo dispuesto en las leyes generales.

4. Que el artículo 42, numerales 2 y 6 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, prevé la creación de la Comisión de Fiscalización, la cual funcionará permanentemente y se integrará exclusivamente por Consejeros Electorales designados por el Consejo General, y contará con un Secretario Técnico que será el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización.
5. Que el inciso jj) del artículo 44 del mismo ordenamiento jurídico, establece que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dictará los Acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y las demás señaladas en la Ley.
6. Que en términos de lo dispuesto en el artículo 41, Base V, apartado B de la Constitución; 190 y 191 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es facultad del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitir Lineamientos específicos en materia de fiscalización, contabilidad, y registro de operaciones de los partidos políticos.
7. Que de acuerdo con el artículo 190, numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la fiscalización de los partidos políticos se realizará en los términos y conforme a los procedimientos previstos por la propia ley y de conformidad con las obligaciones previstas en la Ley General de Partidos Políticos; además la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General de este Instituto por conducto de la Comisión de Fiscalización.
8. Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 190 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por conducto de la Comisión de Fiscalización.
9. Que el artículo 192, numeral 1, incisos a) y d) de la Ley en cita, señala que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ejercerá las facultades de supervisión, seguimiento y control técnico y, en general, todos aquellos actos preparatorios a través de la Comisión de Fiscalización, la cual emitirá los acuerdos generales y normas técnicas que se requieran para regular el registro contable de los partidos políticos y revisará las funciones y acciones

realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización con la finalidad de garantizar la legalidad y certeza en los procesos de fiscalización.

10. Que una de las facultades de la Comisión de Fiscalización es delimitar los alcances de revisión de los informes a los que están obligados a presentar los partidos políticos, establecido en el artículo 192, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
11. Que el numeral 2 del artículo 192 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que, para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Fiscalización contará con la Unidad Técnica de Fiscalización.
12. Que de conformidad con el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización, es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de dichos institutos políticos.
13. Que el artículo 199, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que es atribución de la Unidad Técnica de Fiscalización auditar con plena independencia técnica los ingresos, gastos, documentación soporte y la contabilidad de los partidos políticos, así como los informes que están obligados a presentar.
14. Que el artículo 199, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que la Unidad Técnica de Fiscalización tendrá la facultad de elaborar y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización, los proyectos de Reglamento en materia de fiscalización y contabilidad, y los acuerdos que se requieran para el cumplimiento de sus funciones.
15. Que en términos de lo señalado en el artículo 199, numeral 1, incisos c) y g) de la Ley en comento, corresponde a la Unidad Técnica de Fiscalización vigilar que los recursos de los partidos políticos tengan origen lícito y se apliquen exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos; así como presentar a la Comisión de Fiscalización los informes de

resultados, dictámenes consolidados y proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los partidos.

16. Que el artículo 81 de la Ley General de Partidos Políticos, establece que los dictámenes y proyectos de resolución emitidos por la Unidad Técnica deberán contener como mínimo: a) El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes que hayan presentado los partidos políticos; b) En su caso, la mención de los errores o irregularidades encontrados en los mismos, y c) El señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los partidos políticos después de haberles notificado con ese fin.
17. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 296, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización podrá determinar la realización de verificaciones selectivas de la documentación comprobatoria, a partir de criterios objetivos emanados de las normas y procedimientos de auditoría y dichas verificaciones podrán ser totales o muestrales en uno o varios rubros.
18. En quinta sesión extraordinaria urgente celebrada el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete la Comisión de Fiscalización aprobó el Acuerdo CF/012/2017, mediante el cual se determinaron los alcances de revisión y se establecieron los Lineamientos para la realización de las visitas de verificación, monitoreo de anuncios espectaculares y demás propaganda colocada en la vía pública, diarios, revistas, otros medios impresos, internet y redes sociales derivado de la revisión de los informes de precampaña, apoyo ciudadano y campaña del Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 2017-2018, así como los procesos extraordinarios que se pudieran derivar de dicho proceso.
19. Que el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de Campaña, refiere a la totalidad de las campañas en las que participaron los sujetos obligados y que contendieron a algún cargo de elección popular mismo que es elaborado en cumplimiento a lo establecido en el artículo 81 de la Ley General de Partidos Políticos.
20. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 334 del Reglamento de Fiscalización, derivado de la revisión de los informes, la Unidad Técnica elaborará un Dictamen Consolidado de conformidad con lo establecido en el artículo 81 ya referido; así como en lo establecido en el Boletín 7040

Exámenes sobre el Cumplimiento de Disposiciones Específicas de las Normas Internacionales de Auditoría.

21. Que el Dictamen de los Partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) se componen de los siguientes apartados:

3_PRD

3_PRD (Informes y conclusiones de la revisión)

Anexo I (Ingresos)

Anexo II (Gastos)

Anexo II – A (Gastos no reportados)

PRD_OBS (Observaciones)

ANEXOS_OBS (Anexos del Dictamen)

7_MC

7_MC (Informes y conclusiones de la revisión)

Anexo I (Ingresos)

Anexo II (Gastos)

MC_OBS (Observaciones)

ANEXOS_OBS (Anexos del Dictamen)

22. Que cada uno de los apartados que conforman los Dictámenes de los Partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, se integran de las observaciones detectadas, las respuestas de los sujetos obligados y la conclusión de la autoridad electoral, considerando si estas fueron atendidas, no atendidas o quedaron sin efecto. La integración de cada una de las observaciones está debidamente identificada en los anexos que lo integran y que son parte del mismo Dictamen.

23. Que los efectos de la sentencia **SCM-RAP-124/2018** son:

*“Toda vez que al haber resultado **fundado** el agravio planteado por el recurrente por lo que hace a la falta de fundamentación y motivación, así como de certeza, esta Sala Regional **revoco**, en cuanto a la materia de impugnación, el Dictamen consolidado, procede precisar los efectos del fallo protector, con fundamento en los artículos 17 y 99 de la Constitución, que imponen el deber de impartir justicia de manera pronta, completa e imparcial; 6 de la Ley de Medios que establece la facultad decisoria plena de las Salas Electorales considerando que la justicia es completa hasta que se ejecuten las sentencias y que dicha ejecución se toma más asequible en tanto se fijen con la mayor claridad los efectos jurídicos consecuentes con las decisiones tomadas y los argumentos en que descansan; así como en lo dicho por la Sala Superior en la tesis XXVII/2003, de rubro: **“RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL***

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. MODALIDADES EN SUS EFECTOS PARA PRESERVAR EL INTERES GENERAL.”

Previo a ello, se estima que debe quedar establecido que el Dictamen Consolidado hace referencia a las irregularidades detectadas con motivo de la revisión de los informes de campaña presentados, entre otros, por los Partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, al haber sido los que postularon a la Candidata, de tal modo que implícitamente se tiene que algunos de los gastos reportados por los institutos políticos mencionados que no aparecen en éste, es porque, a juicio de la Autoridad Responsable, cumplieron con las obligaciones en la materia.

En consecuencia, se ordena al Consejo Responsable que, en un plazo de (10) días naturales contados a partir de la notificación de esta Resolución, exponga las consideraciones, debidamente fundadas y motivadas, que la llevaron a la conclusión del estatus de fiscalización a la Candidata.”

En virtud de lo anterior, en cumplimiento a la sentencia emitida en el expediente identificado como SCM-RAP-124/2018; con fundamento en lo previsto en los artículos 41, Bases II, penúltimo párrafo; y V, Apartados A, párrafos primero y segundo y B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 2; 35; 44, numeral 1, inciso j); 190, numeral 2; 192, numeral 1, incisos a), c) y d); 196, numeral 1; y 199 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se ha determinado emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se da cumplimiento a lo mandatado por la Sala Regional Ciudad de México en términos de lo dispuesto en el considerando 23 respecto del Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos y candidatos independientes a los cargos de Gobernador, Diputados y Presidentes Municipales del Proceso Electoral Local 2017-2018; identificado como INE/CG1165/2018, en particular en el apartado 3_PRD y 7_MC.

En estricto cumplimiento a lo mandatado por la Sala Regional Ciudad de México se informa el estatus de fiscalización que guardan los informes de campaña presentados por la candidata a Presidenta Municipal de Tepango de Rodríguez en

el estado de Puebla, postulada por el Partido de la Revolución Democrática, la C. Mireya González Pérez.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 199, numeral 1, incisos c) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 296, numeral 2; y 334 del Reglamento de Fiscalización; en el acuerdo CF/012/2017; así como en lo establecido en el Boletín 7040 Exámenes sobre el Cumplimiento de Disposiciones Específicas de las Normas Internacionales de Auditoría, se determina que, de la revisión realizada, aplicando pruebas selectivas a los ingresos y gastos directos de la candidata C. Mireya González Pérez; así como a los centralizados de los partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano que la postularon como su candidata común y que le generaron algún beneficio, se arribó a lo siguiente:

I. Informes presentados

La candidata a Presidente Municipal, la C. Mireya González Pérez presentó en tiempo y forma 8 informes de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018, en los siguientes términos:

		PRD	MC
Periodo	Tipo	Fecha de presentación	Fecha de presentación
1	Normal	31-mayo-2018	01-junio-2018
1	Corrección	15-junio-2018	15-junio-2018
2	Normal	01-julio-2018	30-junio-2018
2	Corrección	16-julio-2018	16-julio-2018

II. Ingresos y gastos reportados.

En el Dictamen Consolidado de la C. Mireya González Pérez, se da cuenta de los ingresos y gastos reportados en sus informes, mismos que se muestran a continuación:

Partido Político	Candidata	Total de ingresos reportados	Total de gastos reportados
PRD	Mireya González Pérez	2,076.46	2,076.46
MC	Mireya González Pérez	5,579.16	5,579.16
Total		7,655.62	7,655.62

El detalle de los ingresos y gastos no reportados se observa en los Anexos I y II del Dictamen.

De la revisión efectuada a la documentación soporte de los ingresos y gastos presentada en el SIF por parte del Partido de la Revolución Democrática en relación con la C. Mireya González Pérez, se determinó que **la documentación cumplió con lo dispuesto en la normatividad aplicable**, con excepción de lo señalado a continuación, lo cual ya fue materia de análisis y sanción por parte de la autoridad fiscalizadora en la resolución atinente:

Dictamen	Carpeta	Periodo	Observación	Rubro	Página	Anexo	Estatus	Anexo	Análisis	Falta Concreta	Artículo que incumplió
3_PRD	3_PRD	1	Sistema Integral de Fiscalización Registros de operaciones fuera de tiempo	Sistema Integral de Fiscalización Registros de operaciones fuera de tiempo	11-17	Anexo 4_P1	No atendida	Anexo 4_P1	<p>La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria, toda vez que, aun cuando argumenta que dada la naturaleza y complejidad del manejo las operaciones, le impidieron registrar las operaciones en el tiempo que establece la norma electoral, sin embargo, de la verificación en el SIF, se constató que omitió realizar el registro contable de la operación en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación; por tal razón, la observación no quedó atendida.</p> <p>Cabe mencionar, que respecto a la póliza observada en el Anexo 4_P1 del presente Dictamen, el sujeto obligado en comentario vulneró lo dispuesto con el artículo 17 en sus párrafos 1 y 2 del RF, en relación con la Norma de Información Financiera A-2 (en los subsecuente NIF A-2) "Postulados básicos", establece que los sujetos obligados realizan operaciones de ingresos cuando éstos se reciben en efectivo o en especie; y que los gastos ocurren cuando se pagan, se pactan o reciben los bienes o servicios, sin considerar el orden en que se realizan; asimismo, se señala que los gastos deben ser registrados en el primer momento que ocurran, atendiendo al momento más antiguo.</p> <p>La mencionada NIF A-2 establece como reglas, por un lado, que las transacciones que llevan a cabo los sujetos obligados deben reconocerse contablemente en su totalidad, en el momento en el que ocurren, independientemente de la fecha en que se consideren realizados para fines contables; y, por otro, las transacciones se reconocen contablemente cuando, con un acuerdo de voluntades es adquirido un derecho por una de las partes involucradas en dicha transacción y surge una obligación para la otra parte involucrada,</p>	Omisión de reportar en tiempo real (registro extemporáneo en el SIF)	Artículo 38, numerales 1 y 5, del RF

Dictamen	Carpeta	Periodo	Observación	Rubro	Página	Anexo	Estatus	Anexo	Análisis	Falta Concreta	Artículo que incumplió
									<p>independientemente de cuándo se realicen.</p> <p>En cuanto al momento contable en que deben registrarse las operaciones, en el artículo 18, numerales 1 y 2 del RF se impone la obligación a los sujetos obligados de llevar a cabo el registro de las operaciones contables que efectúan en el SIF, precisando que ese registro se debe hacer, en el caso de los ingresos, cuando éstos se realizan, y en el caso de los gastos, cuando estos ocurren.</p> <p>Finalmente, por lo que se refiere al cumplimiento del principio legal del registro contable en tiempo real, en el artículo 38, numeral 1, se le define como el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su realización, en los términos establecidos en el artículo 17 del propio reglamento.</p> <p>A partir de este marco legal y reglamentario, se concluye que los sujetos obligados deben llevar un sistema de contabilidad conformado por registros, procedimientos e informes que permitan la captación, valuación, reporte e identificación de todas las operaciones concernientes a la materia; los cuales, deben ser congruentes y ordenados, de manera que resulten aptos para producir estados financieros en tiempo real, esto es, en forma inmediata, a fin de procurar la transparencia y la rendición de cuentas en los recursos públicos.</p> <p>Así, de la información de los ingresos durante las precampañas y campañas electorales, el plazo máximo para informarlos a la autoridad, será de tres días, posteriores a la recepción del recurso en efectivo o en especie.</p> <p>Por otra parte, cuando se trate de egresos de precampañas y campañas, el plazo para su oportuno registro será de tres días posteriores al pago, acuerdo de voluntades o entrega del bien y/o prestación del servicio, cuando se trate de egresos.</p> <p>Es por ello, que los registros de ingresos se deben efectuar dentro de los tres días siguientes a aquél en que se recibieron en efectivo o en especie, mientras que los gastos</p>		

Dictamen	Carpeta	Periodo	Observación	Rubro	Página	Anexo	Estatus	Anexo	Análisis	Falta Concreta	Artículo que incumplió
									<p>se registrarán dentro de igual plazo, pero siempre atendiendo al momento más antiguo, es decir, cuando los bienes y/o servicios se reciben, pagan o formaliza el acuerdo de voluntades, sin considerar el orden en que cualquiera de estos tres últimos supuestos tenga verificativo.</p> <p>Con base en lo anterior, los registros de ingresos se deben efectuar dentro de los tres días siguientes a aquél en que se recibieron en efectivo o en especie, mientras que los gastos se registrarán dentro de igual plazo, pero siempre atendiendo al momento más antiguo, es decir, cuando los bienes y/o servicios se reciban, paguen o formalice el acuerdo de voluntades, sin considerar el orden en que cualquiera de estos tres últimos supuestos tenga verificativo.</p> <p>Aunado a lo expuesto, el artículo 33, numeral 2, inciso a), del RF señala que se debe reconocer en forma total las transacciones realizadas, las transformaciones internas y los eventos que afecten económicamente al sujeto obligado, lo cual implica que la contabilidad de los partidos políticos durante las precampañas electorales, deben reflejar las entradas y salidas de la totalidad de los movimientos contables que realicen, registrando en todo momento un cargo y un abono.</p> <p>Esto es, soslaya la obligación de registrar los movimientos contables desde el momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su realización (artículo 38, numerales 1 y 5, del Reglamento de Fiscalización), como ha quedado explicado.</p> <p>La finalidad del registro de operaciones en tiempo real es lograr una eficaz fiscalización de los recursos, para lo cual, incluso se implementó una herramienta informática a disposición de los sujetos obligados, para que de manera simultánea a la que procesen su contabilidad en línea, la autoridad pueda fiscalizar sus operaciones de ingresos y egresos.</p> <p>En el caso concreto, al omitir realizar los registros contables en tiempo real, el sujeto obligado provocó que la autoridad se viera imposibilitada de verificar el origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, elementos</p>		

Dictamen	Carpeta	Periodo	Observación	Rubro	Página	Anexo	Estatus	Anexo	Análisis	Falta Concreta	Artículo que incumplió
									<p>indispensables del nuevo modelo de fiscalización. Tales objetivos están sustentados en la legítima finalidad constitucional y legalmente establecida, de alcanzar una efectiva y completa revisión de los recursos utilizados por los sujetos obligados, especialmente, cuando se destinan a financiar actividades proselitistas, debido a las implicaciones que pueden ocasionar en la equidad de la elección de que se trate, pudiendo repercutir, incluso, en la validez de los comicios, en términos de lo previsto en el artículo 41, Base VI, de la Constitución.</p> <p>Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, es uno de los valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente político no registre en el tiempo establecido, los movimientos de los recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que fiscaliza.</p> <p>Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de las operaciones realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos, para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que correspondan.</p> <p>En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que la autoridad electoral se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, atentando así sobre lo establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y paradigmas del</p>		

Dictamen	Carpeta	Periodo	Observación	Rubro	Página	Anexo	Estatus	Anexo	Análisis	Falta Concreta	Artículo que incumplió
									sistema previsto en la legislación. En consecuencia, al omitir realizar el registro contable de una operación en tiempo real, excediendo los 3 días posteriores en que se realizó la operación, en el periodo normal segundo, por un importe de \$629,979.43.		
3_PRD	3_PRD	2	Eventos	Eventos	41	ANEXO 11_P2	No atendida	ANEXO 11_P2	No atendida Del análisis a la respuesta del sujeto obligado y de la revisión en el SIF, se observó que presentó la agenda eventos con antelación a su realización, sin embargo, no cumplió con la antelación de siete días como lo establece la normativa, por tal razón la observación no quedó atendida. Véase ANEXO 11_P2.	Eventos registrados extemporáneamente, de manera previa a su celebración.	143 Bis, numeral 1, del RF.

III. Ingresos y gastos según auditoría

Los ingresos y gastos dictaminados, una vez que los partidos Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano dieron respuesta a los oficios de errores y omisiones correspondientes, se detallan a continuación:

Candidato	Total de ingresos reportados	Ingresos no reportados	Total de Ingresos	Total de gastos reportados	Gastos Determinados por la UTF	Total, de gastos A	Tope de gastos B	Diferencia C=A-B
Mireya González Pérez	\$7,655.32	0.00	\$7,655.32	\$7,655.32	\$0.00	\$7,655.32	\$129,058.51	-\$121,403.19

De anterior se advierte que la C. Mireya González Pérez no rebasó el tope de gastos de campaña correspondiente, una vez sumados los gastos reportados por los partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.

SEGUNDO. Infórmese a la **Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación**, dentro de las **veinticuatro horas** siguientes a la aprobación del presente documento con el que se da cumplimiento a la sentencia emitida en el expediente **SCM-RAP-124/2018**.

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en la página del Instituto Nacional Electoral.

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Ahora, Consejero Presidente, en el orden en que están numerados los Proyectos, correspondería la discusión en lo particular al apartado 9.1. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. Dado que fue reservado por la Consejera Electoral Pamela San Martín, le cedo a ella el uso de la palabra. _____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Puedo nada más hacer una moción. _____

Sólo para facilitar las cosas, creo que se pueden votar en lo general y en lo particular, los apartados que tenían que ver con la matriz, que eran el 9.2, 9.10, 9.13, 9.16 y 9.33, y luego por separado en lo general y en lo particular, el 9.38, que era por la separación del Sistema Integral de Fiscalización. _____

Creo que, estos pueden entrar a la votación y facilitar la discusión. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Adelante, Secretario del Consejo. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales, consulto a ustedes si tienen a bien aprobar en lo general, los Proyectos de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificados en el orden del día como los apartados 9.2, 9.10, 9.13, 9.16 y 9.33, separando de esta aprobación en lo general por lo que hace a la matriz de precios, y tomando en cuenta la fe de errata del apartado 9.10 y la adenda del apartado 9.13. _____
Quienes estén a favor, de aprobarlo en general sírvanse manifestarlo. _____

10 votos. _____

¿En contra? _____

1 voto. _____

Aprobado por 10 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 1 voto en contra (de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles). _____

Ahora someto a la consideración de ustedes la aprobación en lo particular, en relación a estos 5 Proyectos por lo que hace a la matriz de precios tal y como vienen identificados en los Proyectos. _____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. _____

8 votos. _____

¿En contra? _____

3 votos. _____

Son aprobados también en lo particular por 8 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 3 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles). _____

(Texto de los Acuerdos aprobados INE/CG1287/2018, INE/CG1288/2018, INE/CG1289/2018, INE/CG1290/2018 e INE/CG1291/2018) Ptos. 9.2, 9.10, 9.13, 9.16 y 9.33 _____

INE/CG1287/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SCM-RAP-53/2018, PROMOVIDO POR EL C. CHRISTIAN DAMIÁN ROEHRICH DE LA ISLA, OTRORA CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 17 DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ANTECEDENTES

I. Aprobación del Dictamen Consolidado, la Resolución recaída al mismo y Resolución Queja. El seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó en sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado **INE/CG1110/2018** de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de jefe de gobierno, diputados locales y alcaldes, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la Ciudad de México; así como la Resolución **INE/CG1111/2018** recaída a las irregularidades encontradas en el Dictamen aludido.

Asimismo, en dicha sesión se aprobó la Resolución **INE/CG950/2018**, recaída al expediente administrativo sancionador INE-Q-COF/175/2018/CDMX, seguido en contra de la coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como su candidato a Diputado Local por el Distrito 17 de la Ciudad de México, el C. Christian Damián Von Roehrich de la Isla; denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos, en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018 en la Ciudad de México.

II. Recurso de apelación. Inconforme con lo anterior, el diez de agosto de dos mil dieciocho, el **C. Christian Damián Von Roehrich de la Isla** interpuso recurso de apelación para controvertir la parte conducente de la Resolución **INE/CG950/2018**, el cual fue recibido por la Sala Regional del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal Electoral Federal, con sede en la Ciudad de México (en adelante, Sala Regional), quedando registrado bajo el número de expediente **SCM-RAP-53/2018**.

III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, en sesión pública celebrada el treinta y uno de agosto del presente año, la Sala Regional resolvió el recurso de apelación referido, determinando en el resolutivo único, lo que a continuación se transcribe:

*“**ÚNICO.** Se **revocan**, en la parte que fue motivo de controversia, la Resolución y el Dictamen Consolidado impugnados.”*

IV. Derivado de lo anterior, en la ejecutoria antes citada la Sala Regional **revocó la resolución INE/CG950/2018 y en vía de consecuencia el Dictamen Consolidado exclusivamente por lo que hace al tema de los cuatro videos y la respectiva sumatoria de dichos gastos**, para que este Consejo General dicte una nueva resolución, en la que se pronuncie respecto de todas las cuestiones que hizo valer el Actor en su escrito de alegatos y determine lo legalmente procedente; por lo que, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serán definitivas e inatacables, en consecuencia la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de mérito.

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44 numeral 1, incisos aa) y jj); 426, numeral 1 y 427, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de campaña de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputaciones Locales y Ayuntamientos,

correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México, así como instaurar, sustanciar y resolver los procedimientos de queja en materia de fiscalización.

2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones emitidas por las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso del Recurso de Apelación identificado como **SCM-RAP-53/2018**.

3. Que la Sala Regional resolvió revocar la Resolución **INE/CG950/2018**, dictada por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto al C. Christian Von Roehrich de la Isla, por lo que se procede a la modificación de dicho documento, a fin de dar cumplimiento a los efectos precisados en la sentencia de mérito y atender a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria.

4. En ese sentido, en el Considerando **TERCERO numeral 5**, correspondiente al **ESTUDIO DE FONDO** realizado en el recurso de apelación identificado bajo el número de expediente **SCM-RAP-53/2018**, la Sala Regional determinó lo que a continuación se transcribe:

“(…)

TERCERO. Estudio de fondo.

5. síntesis de agravios

El Actor se queja que la Responsable vulneró en su perjuicio diversas disposiciones de la Constitución, de la Convención Americana de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los principios de legalidad, certeza, seguridad jurídica y exhaustividad.

Ello, al ordenar en la Resolución impugnada sumar el monto de 46,400.00 (cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos) a su tope de gastos de campaña bajo el argumento de que omitió reportar el gasto de la producción y edición de cuatro videos.

Señala que se “exorbitaron” las atribuciones conferidas a la Dirección de prerrogativas, puesto que dicha instancia interna no es perito en materia de “producción y edición de videos”, ni dentro de sus atribuciones se encuentra la de poder determinar si los videos de candidatos tienen elementos de

producción, en términos de los artículos 55 de la Ley Electoral y 46 del Reglamento del INE.

De ahí que estime que no hay justificación para que la Responsable se base en su respuesta de que los videos contenían elementos para considerar producción y edición pues no es una instancia experta y su opinión no pudo considerarse como eje nodal en la Resolución impugnada.

En otro aspecto, acusa que la Responsable da una indebida interpretación a su contestación al emplazamiento al referir que “la producción y edición de los videos denunciados es un hecho no controvertido por las partes, pues el mismo fue reconocido tanto por el quejoso como por los sujetos denunciados...” toda vez que jamás reconoció la veracidad de los videos y que, por el contrario, en ese escrito hizo valer la oscuridad, imprecisión, frivolidad de la queja, además de objetar por cuando a su alcance y valor probatorio los elementos aportados, máxime que no se pudo demostrar la existencia indubitable de los videos pues solo se aportaron ligas electrónicas a las que la responsable no pudo acceder.

Por ello, es falso que se trate de un hecho no controvertido pues en todo momento los controvertió.

También aduce que indebidamente se tomó en consideración el valor más alto de acuerdo a la matriz de precios, en donde según utilizó la metodología en términos del artículo 27 del Reglamento de fiscalización; no obstante, de manera arbitraria tomó el costo más alto sin demostrar claramente en la resolución cuáles eran los otros precios de entre los cuales tomó el precio final y con lo que individualizó la sanción.

Que tampoco fue clara al señalar las razones por las cuales estimó que los videos denunciados compartían similitud de características y atributos con el tomado de la matriz de costos, con el fin de poder ser comparables con los presuntamente no reportados.

En otro aspecto, el Actor se duele que no fueron tomados en cuenta sus alegatos presentados el treinta de junio, en atención al oficio INE-JLE-CM/07286/2018, pues no se pronunció y no hizo valoración alguna respecto de sus argumentos; vulnerando con ello los principios de exhaustividad y congruencia.

Por lo que hace al Dictamen reprocha que se haya tomado en cuenta las determinaciones asumidas en la Resolución impugnada respecto del cargo a sus gastos de campaña por la cantidad de 46,400.00 (cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos) pues al tratarse de un acto viciado, por consecuencia deberá ajustarse sin tomarla en cuenta.

5. Que, en coherencia al análisis desarrollado por el citado órgano jurisdiccional, dentro de la sentencia emitida en el expediente **SCM-RAP-53/2018**, en el Considerando **TERCERO numeral 7**, relativo a los efectos de la sentencia, la Sala Regional determinó:

“7. Efectos.

*Al resultar **fundado** el agravio en cuanto a que la Responsable no fue exhaustiva al emitir la Resolución puesto que dejó de atender argumentos esenciales expuestos en el escrito de alegatos, debe **revocarse** la Resolución y, en vía de consecuencia, el Dictamen consolidado **exclusivamente por lo que hace al tema de los cuatro videos y la respectiva sumatoria de dichos gastos**, y ordenar a aquella que:*

*-En un plazo de **diez días naturales**, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta sentencia, en ejercicio de sus atribuciones dicte una nueva resolución, en la que se pronuncie respecto de todas las cuestiones que hizo valer el Actor en su escrito de alegatos y determine lo legalmente procedente.*

Plazo que se estima razonable si se toma en cuenta que en el Dictamen no se determinó que el Actor hubiere rebasado el tope de gastos de campaña.

En caso de que corroborara la existencia de los videos y considerara que se generaron erogaciones éstas deberán sumarse al gasto y, por tanto, modificar el correspondiente Dictamen consolidado.

*Hecho lo anterior, deberá **notificar personalmente** al Actor la nueva resolución, dentro de los **tres días** naturales siguientes al de su dictado, en garantía de su derecho humano de audiencia conforme a lo previsto en los artículos 1º párrafos primero y tercero, y 14 párrafo segundo de la Constitución; e **informar** de ello a este órgano jurisdiccional en los **tres días** naturales subsecuentes.*

*Se **apercibe** a la Autoridad responsable que, en caso de incumplir lo ordenado podrá hacerse acreedora a una medida de apremio o corrección disciplinaria, en conformidad con los artículos 32 y 33 de la Ley de Medios (...).”*

6. Que en cumplimiento a la determinación dictada por la autoridad jurisdiccional en el expediente **SCM-RAP-53/2018**, por lo que hace a la **Resolución** aprobada el seis de agosto por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que resolvió el procedimiento de queja en materia de fiscalización INE/Q-COF-UTF/175/2018/CDMX, este Consejo General modifica la Resolución

INE/CG950/2018, específicamente en los Considerandos 2.1, 2.2 inciso b, 2.3 inciso B; a efecto de emitir un pronunciamiento en cuanto a las manifestaciones vertidas por el Actor en su escrito de alegatos, para quedar en los términos siguientes:

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, INSTAURADO EN CONTRA DE LA COALICIÓN “POR LA CIUDAD DE MÉXICO AL FRENTE”, INTEGRADA POR LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO, ASI COMO SU CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 17 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL C. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/175/2018/CDMX.

(...)

2.1 Diligencias de Investigación

Derivado de la presentación del escrito de queja en materia de fiscalización antes aludido, se instauró un procedimiento administrativo sancionador en contra de la coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano y su otrora candidato a Diputado Local por el Distrito 17 de la Ciudad de México, el C. Christian Damián Von Roehrich de la Isla, lo anterior, al denunciarse la presunta omisión del reporte de seis eventos, gastos inherentes a los mismos, propaganda utilitaria e impresa, lonas, producción, edición de videos y en consecuencia, el supuesto rebase al tope de gastos de campaña, por parte de la coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano y su otrora candidato a Diputado Local por el Distrito 17 en la Ciudad de México, el C. Christian Damián Von Roehrich de la Isla, en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018 en la Ciudad de México.

Por lo que, la Unidad Técnica de Fiscalización ordenó notificar el inicio del procedimiento INE/Q-COF-UTF/175/2018/CDMX, emplazar a los integrantes de la coalición “Por la Ciudad de México al Frente”; así como a su entonces candidato a Diputado Local por el Distrito 17 de la Ciudad de México, el C. Christian Damián Von Roehrich de la Isla; lo anterior, a efecto que contestaran por escrito lo que consideraran pertinente, expusieran lo que a su derecho conviniera, así como para que ofrecieran y exhibieran las pruebas que respaldaran sus afirmaciones.

Al respecto, los sujetos denunciados dieron contestación al emplazamiento formulado²¹⁷, en cuanto a Movimiento Ciudadano, a través del escrito identificado con la clave alfanumérica MC-INE-366/2018, de fecha diez de junio de dos mil dieciocho; el Partido de la Revolución Democrática a través de escrito, sin número, de fecha doce de junio de dos mil dieciocho.

Asimismo, el otrora candidato a Diputado Local por el Distrito 17 de la Ciudad de México, el C. Christian Damián Von Roehrich de la Isla, dio contestación a través de escrito de fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho.

Así las cosas, los sujetos denunciados manifestaron lo que se señala a continuación:

- **En relación al Partido de la Revolución Democrática, integrante de la coalición “Por la Ciudad de México al Frente”.**

Que los hechos narrados en el escrito de queja carecen de circunstancias de modo, lugar y tiempo, que las pruebas ofrecidas tienen el carácter de técnicas y por ellas mismas no acreditan los hechos, además de que cada uno de los ingresos y egresos utilizados en la campaña del candidato a Diputado Local por el Distrito 17 de la Ciudad de México, postulado por la coalición "Por la Ciudad de México al Frente", se encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización

- **En cuanto a Movimiento Ciudadano, integrante de la coalición “Por la Ciudad de México al Frente”.**

Manifestó que, respecto a las acusaciones vertidas por el denunciante, no les asiste la razón toda vez que los conceptos denunciado fueron reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, en tiempo y forma, por el Partido Acción Nacional.

Aunado a lo anterior, expuso que de acuerdo a lo señalado en el convenio de coalición y a la distribución de candidatos, corresponde al Partido Acción Nacional, el cual estará en condiciones de desahogar el requerimiento de información, así como emitir las consideraciones de derecho correspondientes.

²¹⁷ Respecto al Partido Acción Nacional no dio contestación al emplazamiento formulado por esta autoridad.

- **Respecto al C. Christian Damián Von Roehrich de la Isla.**

Señala que las acusaciones realizadas por el quejoso son infundadas dado que no se encuentran soportados con medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, pues en los hechos referidos en el escrito de queja no se expresan de manera clara y precisa las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

De igual forma, señala que diversos gastos se encuentran reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, remitiendo copia de las pólizas y documentación soporte correspondiente. Por otra parte, refiere que para tener acceso a páginas de redes sociales, resulta necesario un interés por parte de los sujetos denunciados.

Asimismo, a través del oficio INE/UTF/DRN/531/2018, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, que informara si de los videos denunciados en el escrito de queja se advertían gastos de producción y edición. En respuesta a lo anterior, mediante el oficio INE/UTF/DEPPP/5063/2018, la citada Dirección Ejecutiva remitió la información requerida, informando que los videos solicitados tienen elementos para considerar producción o edición de los mismos.

De igual forma, a efecto de seguir con la línea de investigación respecto de los presuntos gastos en eventos, la Dirección de Resoluciones y Normatividad, a través del oficio INE/UTF/DRN/553/2018, le solicitó a la Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto la certificación del contenido de las ligas electrónicas señaladas en el escrito de queja; solicitud que fue desahogada a través del oficio INE/DS/2095/2018, mediante el cual remitió el acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/557/2018, en la cual se hizo constar que no se pudo acceder al contenido de las ligas electrónicas solicitadas, pues por una parte se solicitaba el inicio de sesión en la red social y por otra, se señalaba que la página electrónica no existía.

Por otra parte, se solicitó al Consejero Presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, informara si los eventos materia de la queja, habían sido objeto de visita de verificación por parte de ese Instituto, a lo cual manifestó que de la búsqueda realizada a diversos archivos relativos a expedientes sustanciados por esa autoridad, no se encontró que los eventos solicitados se encontraran relacionados con los expedientes de mérito.

Siguiendo con la línea de investigación, se solicitó al Jefe Delegacional del Órgano Político Administrativo en Benito Juárez, informara respecto al presunto evento realizado por el C. Christian Damián Von Roehrich de la Isla, otrora candidato a

Diputado Local por el Distrito 17 de la Ciudad de México postulado por la coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, integrada por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, durante el periodo de campaña en un auditorio de la Delegación Benito Juárez.

Al respecto, el Jefe Delegacional referido manifestó que, de una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos de ese Órgano Político Administrativo, no se localizó ningún antecedente relativo a la solicitud o autorización en algún auditorio de esa Delegación con respecto al evento referido.

Así las cosas, siguiendo con la línea de investigación, mediante razón y constancia, se dio cuenta de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Fiscalización, con el propósito de verificar lo reportado por la coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, por lo que se procedió a ingresar al portal https://sif.ine.mx/sif_campania/app/reportes/simplificados?execution=e4s1, de la que se advierte el reporte mayor de los catálogos auxiliares de la agenda de eventos del citado candidato, por lo que se procedió a la descarga de los archivos mencionados en un disco compacto. Dicha búsqueda se realizó ingresando a http://sif.ine.mx/sif_campania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?execution=e3s1, de la cual se advierte el catálogo auxiliar de la agenda de eventos registrados por parte de la Coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, y su otrora candidato el C. Christian Damián Von Roehrich de la Isla, a la fecha de elaboración de la razón y constancia.

En consecuencia, la autoridad fiscalizadora acordó declarar abierta la etapa de alegatos, por lo cual se ordenó notificar a las partes el proveído respectivo para que, en un plazo de setenta y dos horas, contadas a partir de que recibieran la notificación respectiva, manifestaran por escrito los alegatos que considerara convenientes. Derivado de lo anterior, el quejoso y los sujetos denunciados formularon sus alegatos por escrito.

En cuanto hace al escrito de alegatos presentado por el C. Juan Miguel Castro Rendón, representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante este Consejo, el veintisiete de julio de la anualidad, manifestó:

“...ratifico el contenido del oficio por medio del cual se desahogó el emplazamiento realizado por esa autoridad, del que se desprende de forma clara que no le asiste la razón al quejoso, toda vez que los actos denunciados se encuentran bajo el amparo de nuestra legislación y en cumplimiento al Reglamento de Fiscalización, así como el reporte idóneo ante el Sistema

Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, cumpliendo en forma y tiempo.

Es decir, que esa autoridad cuenta con todos y cada uno de los elementos para desvirtuar la acusación vertida en contra de la Coalición “Por la Ciudad de México” y su candidato, por lo que los actos denunciados se encuentran apegados en los Lineamientos y en la legislación correspondiente que los hechos denunciados cumplen con todas las características pertinentes y el mismo se encuentra reportado en el SIF.

Por lo tanto, cada uno de los elementos que se utilizaron para el desarrollo de la campaña del C. Christian Von Roehrich, cumplió con las normas en la materia y el reporte de los mismos se encuentra, debidamente constituidos en el Sistema Integral de Fiscalización, tal y como se demostró en el desahogo del emplazamiento, por medio del cual se presentaron las documentales técnicas contables correspondientes...”

En cuanto hace al escrito de alegatos presentado el veintiocho de julio de la anualidad por el Mtro. Camerino Eleazar Márquez Madrid, representante propietario ante este Consejo del Partido de la Revolución Democrática, manifestó:

“...Esa Unidad Técnica de Fiscalización, al estudiar el fondo del presente asunto, atendiendo a las reglas generales de la valoración de las pruebas que integran el expediente en que se actúa, podrá arribar a la conclusión de que el asunto que nos ocupa, resulta ser completamente infundado además de que las imputaciones realizadas por la parte actora a todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, además de que no se encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias...”

En el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de su acusación, además de que la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no expresan de manera clara y precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son objeto esencial y principal del conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la queja...

(...)

También, quedó acreditado que, respecto a las fotografías y video denunciados por la parte denunciante, son publicaciones alojadas en la página personal de

la red social Facebook, para su acceso se requiere de un interés por parte de los usuarios registrados, dado la carencia de una difusión indiscriminada o automática hacia toda la ciudadanía, pues de otra forma no se puede acceder al contenido de la página personal de la red social Facebook.
(...)

En cuanto hace al escrito de alegatos presentado por el C. Christian Damián Von Roehrich de la Isla, el tres de agosto de la anualidad, manifestó:

“...Sin que pase inadvertido, que de la respuesta del Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral de fecha quince de junio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/DEPP/DE/DATE/5063/2018 (que se encuentra glosada a fojas 188 a 190 del expediente en que se actúa), se propone que los 4 videos que fueron anexados al escrito de queja insinúan gastos de edición y producción, lo cual no puede ser tomado en cuenta al momento de emitir la resolución correspondiente, en virtud de que la autoridad administrativa electoral si toma en cuenta dicha información con ello podría caer en una falacia de petición de principio al presumir que con dicha respuesta se acredite que los videos que fueron negados y cuya existencia nunca se reconoció tengan que ser cargados a los gastos de campaña del suscrito, puesto que a decir de esa dirección sí se advierten costos de producción y edición.

Lo anterior en virtud que el suscrito jamás reconoció dichos videos, puesto que desde el escrito inicial de contestación de queja se objetaron por cuanto a su alcance y valor probatorio, máxime que la parte actora nunca pudo demostrar la existencia indubitable de dichos videos, pues se basó para ello en una serie de ligas electrónicas, a las esta autoridad administrativo-electoral nunca pudo acceder tal y como se desprende de los autos del procedimiento que se actúa, de modo de dichos videos no podrían ser tomados en consideración para ser cargados a los gastos de campaña del suscrito, más aun tomando en consideración que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, no es perito en materia de producción y edición de videos ni en informática, con lo cual su opinión no puede ser tomada en cuenta como “hablante autorizado” o como autoridad en la materia...”

2.2 Valoración de Pruebas

Una vez que han sido descritos los hechos y las diligencias realizadas, narrando el seguimiento de la línea de investigación trazada; en este apartado se procederá a realizar la valoración de las pruebas de las que se allegó esta autoridad, siendo éstas las siguientes:

a) Documentales Públicas

Las documentales públicas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en términos de los artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21, numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o la veracidad de los hechos a que se refieran, al ser documentales públicas emitidas por servidores públicos en ejercicio de sus facultades, que no están controvertidas y de las cuales en el expediente no existe indicio que las desvirtúe.

- Original del acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/557/2018, remitida por la Encargada del despacho de la Dirección del Secretariado, en su función de Coordinadora de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral.

Dicha documental da cuenta de que las direcciones electrónicas de las que solicitó se realizara la certificación o fe de hechos correspondiente, ya no se encontraban visible al momento de su verificación.

- El oficio INE/UTF/DEPPP/5063/2018, emitido por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Dicha documental da cuenta de que los cuatro videos denunciados presentan características de imagen, audio, gráficos, post-producción y creatividad.

- Razón y constancia, respecto de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Fiscalización, con el propósito de verificar los gastos reportados por la Coalición “por la Ciudad de México al Frente”, con motivo de los eventos denunciados.

La citada documental da cuenta de los eventos registrados en el catálogo de la agenda de eventos, así como los registros contables realizados por los sujetos incoados.

- El oficio sin número, de fecha dieciocho de julio de dos mil dieciocho, signado por el Jefe Delegacional del Órgano Político Administrativo en Benito Juárez.

Dicha documental genera indicios que en el Órgano Político Administrativo en Benito Juárez, no se localizó ningún antecedente relativo a la solicitud o autorización en algún auditorio de esa Delegación con respecto a un evento referido por el quejoso.

b) Documentales Privadas

Las documentales privadas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en términos de los artículos 15, numeral 1, fracción II; 16, numeral 2; y 21, numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tienen valor probatorio indiciario respecto de lo que en ellas se refiere al ser documentales proporcionadas por las partes que no se encuentran amparadas por la validación de un fedatario público ni han sido expedidas por servidores públicos en ejercicio de sus facultades, por lo que su valor probatorio dependerá de todos aquellos elementos que puedan fortalecerlas o que, de manera vinculada, puedan acreditar un hecho puesto que a estas, por sí solas, no se les puede conceder valor probatorio pleno.

- Escrito, sin número, recibido el trece de junio de dos mil dieciocho, presentado por **el Partido de la Revolución Democrática**.

Dicha documental genera indicios respecto al registro en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) de eventos, aportaciones y gastos de diversos conceptos denunciados

- Escrito, de fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho, recibido en la misma fecha, presentado por el otrora candidato a Diputado Local por el Distrito 17 de la Ciudad de México, el C. Christian Damián Von Roehrich de la Isla.

Dicha documental genera indicios respecto al registro en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) de eventos, aportaciones y gastos de los conceptos denunciados.

- Escrito de alegatos, de fecha veintisiete de julio, presentado por el C. Juan Miguel Castro Rendón, representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante este Consejo General.

Dicha documental genera indicios respecto al registro en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) de eventos, aportaciones y gastos de los conceptos denunciados.

- Escrito de alegatos, de fecha veintiocho de julio, presentado por el Mtro. Camerino Eleazar Márquez Madrid, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, ante este Consejo General.

Dicha documental genera indicios respecto al registro en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) de eventos, aportaciones y gastos de los conceptos denunciados.

- Escrito de alegatos, de fecha treinta de julio, presentado por el C. Christian Damián Von Roehrich de la Isla, otrora candidato a diputado local por el Distrito 17 de la Ciudad de México, postulado por la coalición “Por la Ciudad de México al Frente”

Dicha documental genera indicios respecto al registro en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) de eventos, aportaciones y gastos de los conceptos denunciados, así como la manifestación del otrora candidato respecto de que desconoce la existencia de los cuatro videos y por consiguiente los gastos por concepto de producción y edición de los mismos.

- Trípticos remitidos como anexo al escrito de queja.

La documental en comento genera indicios respecto a trípticos conteniendo la imagen y nombre del candidato denunciado.

c) Técnicas

Las pruebas técnicas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en términos de los artículos 15, numeral 1, fracción III; 17; y 21, numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tienen valor probatorio indiciario, por lo que deberán concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, y generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

- Direcciones electrónicas.
- 1 disco compacto que conteniendo fotografías y videos.

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la

Jurisprudencia 4/2014 de rubro **“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN”**, emitida por dicha autoridad jurisdiccional, señala que es posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen.

2.3 Vinculación de Pruebas

Dado lo antes señalado, del caudal probatorio que tuvo a la vista esta autoridad, y a fin de una adecuada valoración del mismo, se debe realizar una consideración de los hechos investigados a la luz de las pruebas que, de manera adminiculada acreditan o desvirtúan las conductas involucradas.

En ese sentido, se debe tomar en cuenta el alcance que cada prueba tenga respecto de los hechos que la misma involucra, analizados al tenor del entorno en el cual se recabaron, los hechos que consigna, y la idoneidad para dar certeza de lo que pretende acreditar, lo anterior conforme lo establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 45/2002²¹⁸, referente a los alcances de las pruebas documentales.

Al respecto, cabe señalar que de las constancias que obran en el expediente, se investiga la presunta omisión del reporte de seis eventos, gastos inherentes a los mismos, propaganda utilitaria e impresa, lonas, producción, edición de videos y en consecuencia, el supuesto rebase al tope de gastos de campaña, por parte de la coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano y su otrora candidato a Diputado Local por el Distrito 17 en la Ciudad de México, Christian Damián Von Roehrich de la Isla, en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018 en la Ciudad de México.

Ahora bien, en virtud de la valoración de las pruebas en su conjunto, tanto de las aportadas por la parte denunciante, como las recabadas por esta autoridad y atendiendo las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, por cuestión de método, en el presente apartado se vincularán las pruebas obtenidas por concepto denunciado, agrupándose éstos de la siguiente manera:

²¹⁸PRUEBAS **DOCUMENTALES**. SUS ALCANCES. (TEPJF). Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60.

A. Conceptos reportados en el SIF. (Cinco eventos, gastos inherentes a los mismos, propaganda utilitaria e impresa.)

B. Conceptos no reportados. (Producción y edición de 4 videos.)

C. Conceptos de los que no se acredita la existencia de los hechos denunciados. (El evento presuntamente realizado el día veinticinco de mayo en un auditorio de la Delegación Benito Juárez y banderas.)

A. Conceptos reportados. (Cinco eventos, gastos inherentes a los mismos, propaganda utilitaria e impresa)

Sobre el particular, cabe señalar que mediante el escrito de queja que dio origen al procedimiento administrativo sancionador que por esta vía se resuelve, se denunció la presunta omisión del reporte por parte de la Coalición integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano en la contabilidad de su otrora candidato a Diputado Local por el Distrito 17 en la Ciudad de México, Christian Damián Von Roehrich de la Isla, de los siguientes conceptos:

- 5 eventos y gastos inherentes a los mismos, tales como equipo de sonido, 1 templete y 2 pantallas con soporte de metal con animación.
- Propaganda utilitaria (gorras, mandil, bolsa de polipropileno, camisas, chaleco negro bordado, banderas de tela azul con logotipo del pan);
- Propaganda impresa (tríptico)
- Lonas: banner (manta), lona back con bastidor.

Para tratar de acreditar lo anterior, la denunciante ofreció como elementos probatorios: fotografías y videos, mismos que de conformidad con los artículos 15, numeral 1, fracción III y 17 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización²¹⁹, son considerados de carácter técnico.

Sin embargo, no obstante la naturaleza imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso y el escaso valor probatorio que configuran por sí solas, al

²¹⁹ Artículo 15. Tipos de prueba, 1. Se podrán ofrecer y admitir las pruebas siguientes: III. Técnicas; Artículo 17. Prueba Técnica, 1. Son pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la Unidad Técnica. 2. Cuando se ofrezca una prueba de esta naturaleza, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.

no encontrarse administradas con otros elementos de convicción, en atención al principio de exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral determinó valorar el alcance indiciario de cada una, con los demás elementos probatorios que obran en el expediente, mismos que fueron producto de la línea de investigación que siguió esta autoridad en aras de generar un mayor nivel de convicción respecto a la veracidad de los hechos denunciados.

Así las cosas, derivado de la denuncia realizada y en contestación al emplazamiento formulado por esta autoridad, el otrora candidato denunciado manifestó que los gastos e insumos generados con motivo de cinco eventos, gastos inherentes a los mismos, propaganda utilitaria e impresa se encontraban reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, para lo cual adjunto diversas pólizas, así como la documentación soporte de cada una.

Por lo que, en atención a lo manifestado por el entonces candidato denunciado, mediante razón y constancia elaborada por esta autoridad, se hizo constar que, en el Sistema Integral de Fiscalización, específicamente en el catálogo auxiliar de eventos del candidato y en su contabilidad con número de ID 49605, se encuentra el registro contable de los conceptos que se mencionan en el siguiente cuadro:

CONCEPTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN EN LA CONTABILIDAD DEL ENTONCES CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 17 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL C. CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA, CUENTA ID 49605	
CONCEPTO DENUNCIADO	PÓLIZA
<i>Eventos:</i> 1. Colonia Narvarte (29/4/18) 2. Colonia Moderna (5/5/18) 3. Colonia Postal (9/5/18) 4. Colonia del Valle (12/5/18) 5. Colonia San Juan (19/5/18)	<i>Eventos:</i> 1. No. Identificador 00003 2. No. Identificador 00001 3. No. Identificador 00002 4. No. Identificador 00005 5. No. Identificador 00007
GORRAS BLANCAS CON LETRAS NARANJA CHRISTIAN, CON AZUL VON, Y LA LEYENDA DIPUTADO LOCAL	POLIZA 13; PERIODO DE OPERACIÓN 1, TIPO NORMAL, SUBTIPO DIARIO; FECHA DE OPERACIÓN 25/05/18; TESTIGO 20180523_095836.jpg
MANDIL BLANCO CON LETRAS NARANJA CHRISTIAN, CON AZUL VON, Y LA LEYENDA DIPUTADO LOCAL	POLIZA 13; PERIODO DE OPERACIÓN 1, TIPO NORMAL, SUBTIPO DIARIO; FECHA DE OPERACIÓN 25/05/18; TESTIGO 20180523_095840.jpg
BOLSA DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO CON NOMBRE DEL CANDIDATO Y LA LEYENDA DIPUTADO LOCAL BENITO JUÁREZ	POLIZA 13; PERIODO DE OPERACIÓN 1, TIPO NORMAL, SUBTIPO DIARIO; FECHA DE OPERACIÓN 25/05/18; TESTIGO 20180523_095843.jpg
CAMISAS COLOR BLANCO BORDADA CON LOGOTIPOS DE LA COALICIÓN Y NOMBRE DEL CANDIDATO	POLIZA 13; PERIODO DE OPERACIÓN 1, TIPO NORMAL, SUBTIPO DIARIO; FECHA DE OPERACIÓN 25/05/18; TESTIGOS 20180523_095903.jpg y 20180523_095909.jpg

CONCEPTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN EN LA CONTABILIDAD DEL ENTONCES CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 17 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL C. CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA, CUENTA ID 49605	
CONCEPTO DENUNCIADO	POLIZA
BANNER (MANTA) CON FOTOGRAFÍA DE CHRISTIAN VON ROEHRICH, AL MARGEN EL LOGO "CHRISTIAN VON" CON LOGOTIPOS DE LOS PARTIDOS DE LA COALICIÓN	POLIZA 13; PERIODO DE OPERACIÓN 1, TIPO NORMAL, SUBTIPO DIARIO; FECHA DE OPERACIÓN 25/05/18; TESTIGO 20180523_100252.jpg
LONA BACK CON BASTIDOR CON FOTOGRAFÍA DE CHRISTIAN VON ROEHRICH, AL MARGEN EL LOGO "CHRISTIAN VON" CON LOGOTIPOS DE LOS PARTIDOS DE LA COALICIÓN	POLIZA 13; PERIODO DE OPERACIÓN 1, TIPO NORMAL, SUBTIPO DIARIO; FECHA DE OPERACIÓN 25/05/18; TESTIGOS 20180523_100525.jpg, 20180523_100527.jpg, 20180523_100730.jpg, 20180523_100731.jpg, 20180523_101031.jpg, 20180523_101033.jpg, 20180523_101034.jpg, 20180523_101256.jpg y 20180523_101257.jpg
CHALECO NEGRO BORDADO CON LOGOTIPOS DE LA COALICIÓN Y NOMBRE DEL CANDIDATO	POLIZA 13; PERIODO DE OPERACIÓN 1, TIPO NORMAL, SUBTIPO DIARIO; FECHA DE OPERACIÓN 25/05/18; TESTIGOS 20180523_095600.jpg y 20180523_095602.jpg
BANDERAS DE TELA AZUL CON LOGOTIPO DEL PAN EN COLOR BLANCO	POLIZA 2; PERIODO DE OPERACIÓN 2, TIPO NORMAL, SUBTIPO EGRESOS; FECHA DE OPERACIÓN 27/06/18; TESTIGO 20180601_141202.jpg
EQUIPO DE SONIDO	POLIZA 2; PERIODO DE OPERACIÓN 1, TIPO NORMAL, SUBTIPO EGRESOS; FECHA DE OPERACIÓN 28/05/18.
1 TEMPLETE	POLIZA 2; PERIODO DE OPERACIÓN 1, TIPO NORMAL, SUBTIPO EGRESOS; FECHA DE OPERACIÓN 28/05/18.
2 PANTALLAS CON SOPORTE DE METAL CON ANIMACIÓN DEL LOGO "CHRISTIAN VON"	POLIZA 2; PERIODO DE OPERACIÓN 1, TIPO NORMAL, SUBTIPO EGRESOS; FECHA DE OPERACIÓN 28/05/18.

Así las cosas, dicha razón y constancia en términos de los artículos 20, numeral 1 y 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al tratarse de un documento elaborado por la autoridad electoral, tiene valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiera, misma que se encuentra robustecida con las documentales privadas proporcionada por otrora candidato denunciado.

Ahora bien, del cuadro anterior se advierte que, respecto de los conceptos denunciados consistentes en: 5 eventos y gastos inherentes a los mismos, tales como equipo de sonido, 1 templete y 2 pantallas con soporte de metal con animación; propaganda utilitaria (gorras, mandil, bolsa de polipropileno, camisas, chaleco negro bordado, banderas de tela azul con logotipo del pan); propaganda impresa (tríptico) y lonas consistentes en banner (manta) y lona back con bastidor,

fueron registrados en la contabilidad con ID 49605 del otrora candidato a Diputado Local por el Distrito 17 de la Ciudad de México, el C. Christian Damián Von Roehrich de la Isla, cinco eventos, gorras, mandil, bolsa de polipropileno, camisas, banner (manta), lona back con bastidor, chaleco negro bordado, 4 banderas de tela azul con logotipo del pan, 1 micrófono, 1 templete, 2 pantallas con soporte de metal con animación tal y como fue referido en el cuadro anterior.

En consecuencia, no se acredita que los sujetos denunciados omitieran realizar el registro de las operaciones respecto a los conceptos referidos en el presente apartado, por lo que el presente apartado se declara como **infundado**.

B. Conceptos no reportados. (Producción y edición de 4 videos.)

Al respecto, del escrito de queja se desprende la denuncia de la presunta omisión de reportar la producción y edición de 4 videos que contienen propaganda electoral del otrora candidato a Diputado Local por el Distrito 17 en la Ciudad de México, Christian Damián Von Roehrich de la Isla, postulado por la coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.

Para tratar de acreditar lo anterior, la parte denunciante ofreció como elementos probatorios: 4 videos, que de conformidad con los artículos 15, numeral 1, fracción III y 17 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, son considerados de carácter técnico.

Por lo que, en aras de obtener mayores elementos con los cuales permitieran a esta autoridad determinar si los videos en comento contenían trabajos de producción y edición, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, que informara si de los videos denunciados en el escrito de queja se advertían gastos de producción y edición de los videos en comento, por lo que, en respuesta a lo solicitado, la citada Dirección Ejecutiva remitió la información requerida, informando que los videos solicitados tienen elementos para considerar producción o edición de los mismos.

Ahora bien, es importante señalar que la producción y edición de los videos denunciados es un hecho no controvertido por las partes, pues el mismo fue reconocido tanto por el quejoso como por los sujetos denunciados (Partido de la

Revolución Democrática, como el otrora candidato a la Diputación Local por el Distrito 17 de la Ciudad de México, Christian Damián Von Roehrich de la Isla)²²⁰, al señalarse que se realizaron gastos de producción y edición de 4 videos, pues el candidato denunciado señaló que las erogaciones realizadas se encontraban reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización, mediante la póliza número 22, tipo: normal, subtipo: diario, para lo cual adjuntó la factura del proveedor “producciones k5”, por concepto de “servicios de pre, producción y post producción de comerciales para promoción de actividades, desarrollo de creatividad para videos, levantamiento de imagen y audio en eventos para ediciones posteriores, transmisión de evento en línea en redes sociales”, por un monto de \$11,020.00 (once mil veinte pesos 00/100 M.N.).

En ese sentido, no pasa desapercibido para esta autoridad lo manifestado por el C. Christian Damián Von Roehrich de la Isla, en su escrito de alegatos, respecto a lo siguiente:

“...sin que pase inadvertido, que de la respuesta del Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral de fecha quince de junio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/DEPP/DE/DATE/5063/2018 (que se encuentra glosada a fojas 188 a 190 del expediente en que se actúa), se propone que los 4 videos que fueron anexados al escrito de queja insinúan gastos de edición y producción, lo cual no puede ser tomado en cuenta al momento de emitir la resolución correspondiente, en virtud de que la autoridad administrativa electoral si toma en cuenta dicha información con ello podría caer en una falacia de petición de principio al presumir que con dicha respuesta se acredite que los videos que fueron negados y cuya existencia nunca se reconoció tengan que ser cargados a los gastos de campaña del suscrito, puesto que a decir de esa dirección sí se advierten costos de producción y edición.

Lo anterior en virtud que el suscrito jamás reconoció dichos videos, puesto que desde el escrito inicial de contestación de queja se objetaron por cuanto a su alcance y valor probatorio, máxime que la parte actora nunca pudo demostrar la existencia indubitable de dichos videos, pues se basó para ello en una serie de ligas electrónicas, a las esta autoridad administrativo-electoral nunca pudo

²²⁰ Lo anterior, al contestar el emplazamiento formulado por esta autoridad.

acceder tal y como se desprende de los autos del procedimiento que se actúa, de modo de dichos videos no podrían ser tomados en consideración para ser cargados a los gastos de campaña del suscrito, más aun tomando en consideración que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, no es perito en materia de producción y edición de videos ni en informática, con lo cual su opinión no puede ser tomada en cuenta como “hablante autorizado” o como autoridad en la materia...”

No obstante, la existencia de los videos y de los trabajos de edición y producción, fue reconocida por el C. Christian Damián Von Roehrich de la Isla, quien tuvo a la vista los cuatro videos, ya que los mismos le fueron anexados en el oficio INE/JLE-CM/06984/2018 (visible a fojas 448-456 del expediente) mediante el cual se le pidió se pronunciará respecto de los mismos.




A lo anterior, en fecha veintiuno de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización, escrito signado por el C. Christian Damián Von Roehrich de la Isla, en el que confirmó que la factura emitida por PRODUCCIONES K5 S.A. de C.V., ampara la producción y edición de los cuatro videos **que le fueron anexados en el oficio INE/JLE-CM/06984/2018**. (foja 395 el expediente).




Ahora bien, mediante razón y constancia elaborada por esta autoridad, se dio cuenta de la búsqueda realizada de los conceptos mencionados en el presente apartado en el Sistema Integral de Fiscalización, específicamente en la contabilidad con ID 49605, sin embargo, una vez localizada la póliza número 22, tipo: normal, subtipo: diario, **se advirtió la factura y testigos de los servicios brindados, sin embargo, los testigos anexos a la póliza, no corresponden a los videos denunciados**. Lo anterior es así toda vez tanto la duración de los videos, así como el contenido de cada uno, es diverso a los videos materia de la presente queja.

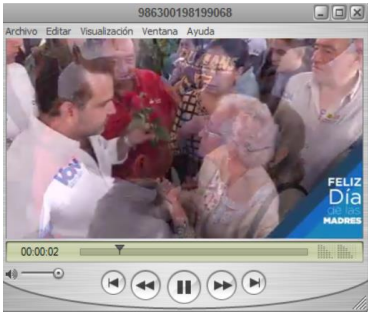

Así las cosas, dicha razón y constancia en términos de los artículos 20 y 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al tratarse de un documento elaborado por la autoridad electoral, tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiera.

Asimismo, en relación a los cuatro (4) videos denunciados, esta autoridad advierte que es un hecho notorio que los mismos presentan características de edición y mezcla de efectos, tal y como se describe en la siguiente tabla:

VIDEO 1	COMENTARIOS
<p>1.</p> 	<p>1. Min 00:00:03- Se observa la inserción del logotipo que uso el entonces candidato.</p>
<p>2.</p> 	<p>2. Min.00:00:14- Se observan transiciones entre planos.</p>
<p>3.</p> 	<p>3. Min.00:01:22- Se observa la inserción del logotipo que uso el entonces candidato como fin del video.</p>

VIDEO 2	OBSERVACIONES
<p>1.</p> 	<p>1. Min 00:00:03- Se observa la inserción del logotipo que uso el entonces candidato en la esquina superior derecha así como al pie del video.</p>
<p>2.</p> 	<p>2. Min.00:01:44- Se observan transiciones entre planos.</p>
<p>3.</p> 	<p>3. Min.00:02:45- Se observa la inserción de una imagen con datos del entonces candidato como fin del video.</p>

VIDEO 3	OBSERVACIONES
<p>1.</p> 	<p>1. Min 00:00:00- Se observa la inserción del logotipo que uso el entonces candidato al centro del video.</p>
<p>2.</p> 	<p>2. Min.00:00:04- Se observan transiciones de imágenes del entonces candidatos entre planos.</p>
	<p>3. Min.00:01:26- Se observa la inserción de una imagen con datos del entonces candidato como fin del video.</p>

VIDEO 4	OBSERVACIONES
<p>1.</p> 	<p>1. Min 00:00:02- Se observa la inserción de un mensaje con motivo del día de las madres en la esquina inferior derecha del video.</p>
<p>2.</p> 	<p>2. Min.00:00:13- Se observa la inserción de una imagen con datos del entonces candidato como fin del video.</p>

Al respecto, a efecto de corroborar lo anterior, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos su opinión, a fin que manifestara si en los videos denunciados, se advierten elementos de producción y edición que pudiesen implicar un gasto; cabe precisar que, la solicitud que se hizo la Dirección en comento, obedece a que ésta es el área del Instituto, encargada de verificar y tramitar lo relacionado con las pautas para transmisión en televisión y radio de los spots de los sujetos obligados; y por tanto, cuenta con la experiencia y conocimientos para emitir una opinión del contenido del material audiovisual en comento, sin que pase desapercibido que, en la emisión de su opinión, analiza si los videos, cuentan con las siguientes características:

- **Calidad de video para transmisión Broadcast:** Manejo de resolución, códecs tasa de bit rate y tipo de compresión para poder ser radiodifundidos.

- **Producción:** Probable uso de alguno de los siguientes equipos: semi-profesionales o profesionales de producción como son: Cámaras de foto o video semi-profesionales a profesionales, iluminación, microfónica semi-profesional a profesional, grúas, dolly cam, steady cam, dron, entre otros.
- **Manejo de imagen:** calidad de imagen, encuadres, movimiento de cámaras, definición, uso de imágenes stock, locaciones.
- **Audio:** Calidad de grabación, locutores, jingles, mezcla de audios.
- **Gráficos:** Diseño, animaciones, calidad de los mismos.
- **Post-producción:** Edición, efectos, mezcla de efectos y animaciones con imágenes.
- **Creatividad:** Uso de guion y contenidos.

En ese sentido, atento a las características antes enlistadas, respecto a los multicitados videos, dicha Dirección manifestó que éstos contaban con manejo de imagen, audio, gráficos, post-producción y creatividad.

En razón de lo antes expuesto, esta autoridad, atendiendo a las reglas de la lógica, experiencia y sana crítica, tiene por acreditada la existencia de cuatro (4) videos que implicaron un trabajo de edición; ya que, al concatenar las características de los mismos, con la manifestación expresa del candidato denunciado, quien al tener a la vista los videos que le fueron remitidos a través del oficio **INE/JLE-CM/06984/2018**, refirió que el **gasto por concepto de la edición y producción de dichos videos se encontraban amparados** con la factura emitida por PRODUCCIONES K5 S.A. DE C.V.²²¹; así como la opinión de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, en la que analizó cada uno de los cuatro (4) videos denunciados, concluyendo que éstos cuentan con características propias de edición.

Por lo anterior, se concluye que los sujetos incoados fueron omisos en reportar en el Sistema Integral de Fiscalización los gastos derivados de la edición de los cuatro videos materia del presente procedimiento.

Ahora bien, toda vez que nos encontramos frente a una conducta infractora de la normatividad electoral (omisión de reportar el gasto por la producción y edición de 4 videos), resulta necesario determinar el valor más alto de acuerdo con la matriz de precios, con el precio más alto del concepto denunciado.

²²¹ Que tal como se expuso, las muestras no coinciden con los videos señalados por el quejoso.

Al respecto, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, por lo que se consideró información relacionada en los registros contables presentados a través del Sistema Integral de Fiscalización por los sujetos obligados.

Realizado lo anterior, se buscaron aquellos con características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran ser comparables con los gastos no reportados.

Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de los gastos no reportados por el sujeto obligado.

En el caso concreto se localizó en la matriz de precios, el costo de cotizaciones de mercado con atributos y características similares, mismo que a continuación se describe:

Proveedor	Concepto	Costo unitario.	Número de videos	Costo Total
.N Media S. de R.L. de C.V.	Video, planeación, levantamiento, edición y copiado de imagen en video para contenidos de campaña adaptados a redes sociales	\$11,600.00	4	\$46,400.00

En este contexto, se tiene que el costo por la producción y edición de 4 videos, asciende a un monto total de **\$46,400.00 (Cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)**.

En consecuencia, toda vez que los sujetos incoados omitieron realizar el reporte del gasto por la producción y edición de 4 videos, por un monto de **\$46,400.00 (cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)**; por lo que dicha conducta vulneró lo establecido por los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y el 127 del Reglamento de Fiscalización, el presente apartado se declara como **fundado**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

(...)

7. Dictamen

Una vez que han sido acreditada la existencia de los videos y los gastos por concepto de edición y producción de los mimos, se mantiene en sus términos el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Jefe de Gobierno, Diputados Locales y Alcaldes, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017- 2018, en la Ciudad de México, correspondiente a la Coalición Por la Ciudad de México al frente, mismo que en su anexo II y su correlativo anexo II A, tal y como se muestra a continuación:

Anexo II A

ESTADO ELECCIÓN	ID CONTABILIDAD	CARGO	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	GASTOS NO REPORTADOS		
						QUEJA	JORNADA ELECTORAL	TOTAL DE GASTO NO REPORTADO
Ciudad de México	49605	Diputado Local MR	Christian Damián	Von Roehrich	De la Isla	\$46,400.00	\$5.89	\$46,405.89

Anexo II*

ID	CARGO	SUJETO OBLIGADO	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	TOTAL DE GASTOS REPORTADOS	TOTAL DE GASTOS DETERMINADOS POR AUDITORÍA	TOTAL DE GASTOS	TOPE DE GASTOS
49605	DIPUTADO LOCAL MR	POR LA CDMX AL FRENTE	CHRISTIAN DAMIAN	VON ROEHRICH	DE LA ISLA	\$ 435,639.93	\$ 46,405.89	\$ 482,045.82	\$ 625,443.22

* Para efecto ilustrativo de lo ordenado por la Sala Regional Ciudad de México, en la ejecutoria recaída al expediente SCM-RAP-53/2018, únicamente se transcribe lo correspondiente al C. Christian Damian Von Roehrich de la Isla, en específico lo relativo a los Gastos Reportado, Gastos Determinados por la autoridad, Total de Gastos, y Tope de Gastos.

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

A C U E R D A

PRIMERO. Se modifica la parte conducente de la Resolución **INE/CG950/2018**, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en fecha seis de agosto de dos mil dieciocho, en los términos precisados en los Considerandos **6** del presente Acuerdo, manteniéndose la sanción impuesta en dicha resolución.

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral informe a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal Electoral Federal, con sede en la Ciudad de México, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SCM-RAP-53/2018**.

TERCERO. Notifíquese personalmente al C. Christian Damián Von Roehrich de la Isla, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SCM-RAP-53/2018**.

CUARTO. En términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán efectivas a partir que el presente Acuerdo haya causado estado; y los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas en la presente determinación, serán destinados organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, en los términos de las disposiciones aplicables.

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1288/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA REGIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE SCM-RAP-78/2018

A N T E C E D E N T E S

I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. El seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado **INE/CG1165/2018** y la resolución **INE/CG166/2018**, respecto a las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de los ingresos y gastos de las candidaturas a los cargos de gobernador y gobernadora, diputaciones y ayuntamientos correspondientes al Proceso Electoral Local ordinario 2017-2018 en el Estado de Puebla.

II. Recurso de apelación. Inconforme de las sanciones impuestas por el **Consejo General del Instituto Nacional Electoral**, el catorce de agosto de dos mil dieciocho el Partido Nueva Alianza presentó recurso de apelación para controvertir la parte conducente del Dictamen Consolidado y resolución antes mencionados, mismo recurso que fue radicado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en la Ciudad de México (en adelante, Sala Regional) el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, quedando registrado bajo el número de expediente **SCM-RAP-78/2018**.

III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, en sesión pública celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, la Sala Regional resolvió el recurso referido, determinando lo que a la letra se transcribe:

*“**ÚNICO.** Se **revoca** la resolución Impugnada, para los efectos precisados en la Sentencia”*

IV. Derivado de lo anterior, en la ejecutoria antes citada se revocó el Dictamen Consolidado y la resolución impugnada, únicamente respecto del considerando **36.7**, inciso **h)** conclusión **6_C21_P2** del Resolutivo **SÉPTIMO** de la citada Resolución, toda vez que la Sala Regional, advirtió que la sanción impuesta a Nueva Alianza por un lado partió de una matriz de precios incorrecta, es decir que la misma no correspondía al concepto de espectaculares, sino a refrescos de la marca Pepsi, en lata de 355 ml y en segundo lugar la autoridad al momento de sancionar la conducta no tomó en cuenta las características específicas de los diez espectaculares, considerando las medidas, ubicación, zona geográfica y periodos de exhibición para la imposición de la sanción, misma que deberá modificarse tomando en cuenta las características de cada uno de los elementos observados; y, en virtud de que, de conformidad al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c), d), g) y o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de Acuerdo correspondiente.

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j), aa) y jj); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de los ingresos y egresos de los partidos políticos.

2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso, el Recurso de Apelación identificado con el número de expediente **SCM-RAP-78/2018**.

3. Que la Sala Regional resolvió revocar el Dictamen Consolidado **INE/CG1165/2018** y la resolución **INE/CG1166/2018** en los términos referidos por el citado fallo, por lo que, a fin de dar debido cumplimiento a la sentencia de mérito, se procederá a atender a cabalidad las bases establecidas en la ejecutoria precisada.

4. En ese sentido, en el Considerando TERCERO en el inciso **E)** del apartado de **ESTUDIO DE FONDO** de la ejecutoria dictada en el recurso de apelación identificado bajo el número de expediente **SCM-RAP-78/2018**, la Sala Regional determinó lo que a continuación se transcribe:

“TERCERO. Estudio de fondo.

(...)

E) Estudio de los agravios

*En ese tenor, se considera que los agravios son **fundados y suficientes para revocar la Resolución Impugnada** respecto a la vulneración de los principios de debida fundamentación y motivación.*

(...)

En el caso, como se advierte de la Resolución impugnada se le impuso una sanción al Actor de \$444,976.00 (cuatrocientos cuarenta y cuatro mil novecientos setenta y seis pesos 00/100) por la omisión de reportar gastos de campaña, apoyado en el Dictamen Consolidado, en el que se concluyó que no documentó los 10 (diez) espectaculares 3 (tres) bardas.

Si bien, en la demanda Nueva Alianza reconoce la conducta; lo cierto es que considera que la cantidad por la que se le sanciona es excesiva y partió de inconsistencias de la Autoridad Responsable, en específico por haber tomado una matriz de precios errónea.

En efecto, el Dictamen consolidado refiere que la cantidad monetaria que omitió reportar Nueva Alianza, se identifica al tenor de lo detallado en el Anexo 19_P2, del que se advierte:

‘Ahora bien, por lo que corresponde a los identificados con (2) en la columna ‘Referencia’, el sujeto obligado omitió reportar 10 espectaculares, 3 Bardas como se detalla en el siguiente cuadro:

Identificación del costo para valuación en la Matriz de Precios

Id matriz de precios	Proveedor	Concepto	Unidad de medida	Importe con IVA
12988	Alcance Publicidad S De RL De CV	Espectacular	Pieza	\$44080
18717	Anabel Espinoza Molina	Bardas	Pieza	\$1393

Nota: Se adjunta como anexo al Dictamen Consolidado la matriz de precios correspondiente a la entidad

La determinación del costo se presenta en el anexo II-A, “Monitoreo Vía Pública’

De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar 10 gastos en espectaculares valuado en \$440,800.00 y 3 bardas valuado en \$4,176.00

Una vez obtenido el costo por el uso o goce de los bienes y servicios no reportados, se procedió a determinar su valor de la forma siguiente:

Id candidato	Nombre del candidato	Id matriz de precios	Proveedor	Concepto	Unidad de medida	Importe con IVA
51880	Ángel Gerardo Isias Maldonado	12988	Alcance Publicidad S De RL De CV	Espectaculares	Pieza	\$440,800.00
51880	Anabel Espinoza Molina	18717	Anabel Espinoza Molina	Bardas	Pieza	\$4176.00

Por lo anterior, la observación **queda no atendida.**’

De dicho anexo se aprecia que, en lo tocante a los diez espectaculares se utilizó la matriz de precios con “ID” 12988; sin embargo, como se aprecia del Anexo relativo a la “Matriz de Precios para la Campaña 2017-2018”, local y federal, dicha matriz no corresponde a un concepto de “Espectaculares”, ni relativo a la candidatura de una diputación local por el Estado de Puebla, sino la Matriz utilizada, según el anexo corresponde al rubro siguiente:

ID	PROCESO	ENTIDAD	TIPO DE GASTO	CONCEPTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO
12988	CAMPAÑA	SAN LUIS POTOSI	GASTOS DE PROPAGANDA	ALIMENTOS	REFRESCO PEPSI LATA 355 ML	\$10.00

En tales circunstancias, como lo refiere Nueva Alianza, la Autoridad Responsable al imponer la sanción partió de una inconsistencia, pues identificó que la matriz de precio que se aplicaba, era una que, de acuerdo al Anexo que contiene las matrices de precios, no corresponde al concepto de espectaculares por el que se está sancionado, sino de “Refresco, Pepsi, lata 355 ml”.

*De igual forma es **fundado** lo que sostiene el Actor, en lo relativo a que la Autoridad Responsable al momento de sancionar la conducta debió tomar en cuenta las características específicas de los espectaculares, cuyo egreso no se reportó, considerando las medidas, ubicación, zona geográfica y periodos de exhibición.*

(...)

De lo anterior, se puede inferir que los datos relativos a las medidas, ubicación, zona geográfica y periodos de exhibición, son elementos necesarios para poder determinar el monto de los gastos erogados, pues sirven de parámetro para establecer el impacto visual que tuvieron sobre el electorado, elementos que no fueron considerados por la Autoridad Responsable al momento de establecer la sanción.

*De igual forma, es pertinente destacar que de acuerdo al artículo 27, párrafo 1, incisos a) y b) del Reglamento, la determinación de los gastos no reportados deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio; dichas condiciones de uso, se medirán en relación **con la disposición geográfica y el tiempo**, por lo que en el caso, como lo refiere el Actor, es indispensable se identifique plenamente el periodo de colocación de los espectaculares para que se cuente con la información homogénea y comparable a fin de establecer la sanción que se le asemeje al caso.*

Por lo anterior, se puede concluir que la Resolución Impugnada carece de la debida fundamentación y motivación, pues al momento de imponer la sanción a Nueva Alianza, se apoyó en una matriz de precios que no es compatible con el caso en análisis, aunado a que se abstuvo de considerar las medidas, ubicación, zona geográfica y periodos de exhibición, para poder determinar el monto de los gastos erogados.

(...)

Asimismo, mediante el Considerando TERCERO inciso **F)** de la ejecutoria dictada en el recurso de apelación en comento, la Sala Regional determinó lo que a continuación se transcribe:

“F) Sentido de la sentencia y efecto.

Al resultar fundados los agravios del Actor, mediante la metodología de estudio y resolución implementada en la presente sentencia, se determina que debe revocarse el acto impugnado.

*Por ello, esta Sala Regional procede a fijar los efectos de la sentencia para garantizar el pleno goce y hacer efectivos los derechos de la Parte actora, con fundamento en los artículos 17 y 99 de la Constitución, así como 6 de la Ley de Medios y la Tesis XXVII/2003 de la Sala Superior de rubro: “**RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION. MODALIDADES EN SUS EFECTOS PARA PRESERVAR EL INTERES GENERAL**”.*

Por lo anterior, se ordena al Consejo General, que

*a) En el plazo de **diez días naturales** emita una nueva resolución, de manera fundada y motivada en la que al momento de imponer la sanción a Nueva Alianza por la observación identificada en el Dictamen Consolidado como 6_C21_P2, atienda a la matriz de precios que más se le asemeja al concepto no reportado – diez espectaculares-, de acuerdo a sus características específicas, considerando sus medidas, ubicación, zona geográfica y periodos de exhibición.*

*b) Una vez hecho lo anterior, deberá notificar personalmente al Actor la nueva resolución, dentro de los **tres días naturales** siguientes al de su dictado, a fin de salvaguardar su garantía de audiencia; e informar de ello a esta Sala Regional en los **tres días naturales** subsecuentes a que ello ocurra.”*

Lo anterior, a efecto de que esta autoridad emita una nueva determinación considerando lo expuesto por la Sala Regional, por lo que este Consejo General procederá a acatar la sentencia, para lo cual, en congruencia con el sentido de la ejecutoria de mérito, se realizaran las siguientes modificaciones al Dictamen Consolidado y resolución impugnada:

Conclusión	
Conclusión original 6_C21_P2	“El sujeto obligado omitió reportar el gasto de espectaculares y propaganda en vía pública, por un monto de \$444,976.00”
Efectos	Que la autoridad electoral emita una nueva resolución a efecto de que al momento de imponer la sanción a Nueva Alianza por la observación 6_C21_P2, tome en cuenta la matriz de precios que más se asemeje al concepto no reportado, considerando las características específicas del mismo.

Conclusión	
Acatamiento	Toda vez que la Sala Regional estableció que al momento de imponerse la sanción a Nueva Alianza, por los conceptos no reportados (diez espectaculares y tres bardas) se tomó una matriz de precios incorrecta y no se tomaron en cuenta las características específicas, por lo que se debe emitir una nueva resolución al inciso h) conclusión 6_C21_P2 del considerando 36.7 , en la que se tome en cuenta la matriz de precios con Id 10834, especificando las medidas y características específicas de ubicación geográfica de los espectaculares que fueron materia de impugnación.

5. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las condiciones socio económicas del ente infractor.

Bajo esta tesitura, debe considerarse que los partidos políticos sujetos al procedimiento de fiscalización que cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que, en su caso, se les imponga, toda vez que mediante el Acuerdo CG/AC-039/17 emitido por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Puebla, se les asignó como financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2018, los montos siguientes:

Partido Político	Financiamiento público actividades ordinarias 2018
Partido Nueva Alianza	\$19,944,547.70

En este orden de ideas, y de acuerdo al criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es idóneo que esta autoridad considere, para efecto de la imposición de las sanciones que pudieran determinarse, la capacidad económica de los partidos políticos derivada del financiamiento público federal para actividades ordinarias¹.

En razón de lo anterior, el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG339/2017,

¹ Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con financiamiento público local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin recursos económicos para llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente.

mediante el cual aprobó las cifras de financiamiento público de los Partidos Políticos Nacionales y gastos de campaña del conjunto de candidaturas independientes para el ejercicio dos mil dieciocho, determinando asignarles a los sujetos obligados que nos ocupan los montos siguientes:

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido mediante oficio INE/UTVOPL/6705/2018 el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales remitió el oficio IEE/PRE/3827/18 suscrito por el Lic. Jacinto Herrera Serrallonga, Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Puebla mediante el cual informó que el partido político no cuenta con saldos pendientes por pagar, relativos a sanciones impuestas en diversos procedimientos administrativos sancionadores.

Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que los partidos políticos con financiamiento local tienen la capacidad económica suficiente con la cual puedan hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en la presente Resolución.

En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente para el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, pues aun y cuando tengan la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean establecidas conforme a la normatividad electoral.

Ahora bien, por lo que hace a la capacidad económica de los partidos políticos que recibieron financiamiento público estatal, con la finalidad de no afectar las actividades ordinarias del mismo, el pago de las sanciones económicas que en su caso se impongan se realizará en términos del Acuerdo **INE/CG61/2017**.

Esto es, las sanciones económicas impuestas con base en la capacidad económica estatal, deberán ejecutarse por el Organismo Público Local de la entidad federativa, para lo cual dicho organismo deberá considerar, en términos de lo dispuesto en el **Lineamiento Sexto, apartado B del Acuerdo INE/CG61/2017**, lo siguiente:

- Una vez que las sanciones impuestas por la autoridad electoral nacional queden firmes, sea por determinación de la autoridad jurisdiccional correspondiente o por que las mismas no hayan sido materia de impugnación, las sanciones se harán efectivas a partir del mes siguiente en que queden firmes.
- De conformidad con lo anterior, el Organismo Público Local deberá llevar el registro de las notificaciones realizadas a los sujetos obligados en la entidad federativa correspondiente, de las sanciones impuestas con cargo al financiamiento público estatal, en los formatos que para tal efecto proporcione la Dirección Jurídica de este Instituto, en cumplimiento del artículo Transitorio PRIMERO del Acuerdo INE/CG61/2017.

El área competente de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales informará a los Organismos las sanciones que hayan quedado firmes.

Para lo anterior, la Unidad Técnica de Vinculación deberá remitir oportunamente las constancias de notificación correspondientes a la Dirección Jurídica.

- Para la ejecución de las sanciones el Organismo Público Local deberá considerar un descuento económico que no puede exceder del 50% (cincuenta por ciento) del financiamiento público mensual que reciba el instituto político en la entidad para el desarrollo de sus actividades ordinarias.

Conforme lo anterior, el Organismo Público Local fijará las sanciones a ejecutar en el mes correspondiente; considerando en todo momento, que de existir un conjunto de sanciones firmes pendientes de cobro por un importe superior al 50% del financiamiento público del partido político, éstas deberán ser cobradas conforme al orden en que quedaron firmes, en el entendido que no podrá descontarse un importe menor al equivalente al porcentaje antes mencionado; por lo que de acuerdo al monto de sanción, podrá acumular para su ejecución el número de sanciones necesarias hasta que queden completamente pagadas.

- Las sanciones impuestas y cobradas con recursos provenientes del financiamiento público estatal deberán de ser destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en términos de las disposiciones aplicables, por lo que se estará a lo establecido en el resolutivo respectivo, en términos de lo dispuesto en el Lineamiento Sexto, Apartado B, numeral 2 del Acuerdo INE/CG61/2017.
- El Organismo Público Local verificará en el plazo de 15 días hábiles siguientes a que estén firmes las sanciones impuestas a los precandidatos, si los sujetos obligados realizaron el pago de forma voluntaria; para lo cual deberá atender la forma de pago que ordene la presente Resolución; para ello, dicho Organismo pondrá a disposición de los sujetos obligados las formas o procedimientos que les faciliten realizar el pago.
- Los OPLE deberán emitir un informe al corte de cada mes, que contenga las sanciones cobradas en dicho periodo, mismo que será hecho del conocimiento de la Unidad de Vinculación del Instituto, en términos de lo dispuesto en el Lineamiento Sexto, Apartado B, numeral 2 del Acuerdo INE/CG61/2017.
- Por otra parte, en caso que las sanciones económicas sean impuestas con base en la capacidad económica federal, deberá procederse en términos de lo dispuesto en el Acuerdo INE/CG61/2017, en lo específico en el Lineamiento Sexto, apartado B, numeral 1, incisos c) y d) en relación al Apartado A del mismo Lineamiento.
- Las sanciones impuestas y cobradas deberán de ser destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en términos de las disposiciones aplicables.

6. Modificación al Dictamen Consolidado INE/CG1165/2018.

Por lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Ciudad de México, este Consejo General modifica el Dictamen consolidado respecto de las irregularidades encontradas de la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Puebla, identificado con el número **INE/CG1165/2018**, relativo a la conclusión

6_C1_P2, considerando **36.7** del citado Dictamen en los términos que señala el **Anexo Único** que forma parte del presente Acuerdo.

Mismo que, en su parte relevante menciona, que como resultado del nuevo análisis se procedió a localizar en la matriz de precios el concepto generado por el gasto a sancionar, que corresponde a diez espectaculares, siendo este el que más se la asemeja al gasto no reportado, de acuerdo a las características que presentan.

En razón de lo expuesto, se localizó el gasto en mención en el estado de Puebla y con el siguiente proveedor:

Id matriz de precios	Proveedor	Concepto	Unidad de medida	de	Importe con IVA
10834	Mega estructuras Publicitarias S. de R.L. de C.V.	Espectacular	Metros Cuadrados		\$300.00

En este sentido, el monto señalado en el cuadro que antecede, es el que se consideró por la Dirección de Auditoría para cuantificar el gasto no reportado por el partido Nueva Alianza consistente en diez espectaculares que no fueron reportados.

Por lo anterior, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos por la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se realizó nuevamente el procedimiento para cuantificar el costo del gasto identificado por cuanto hace a la propaganda en vía pública que no fue reportada, para poder de esta manera individualizar la sanción.

En este orden de ideas, se utilizó el valor más alto en la matriz de precios señalada, para ser aplicado quedando de la siguiente forma:

Id Candidato	Nombre del Candidato	Concepto	Unidad de Medida	Medidas	Unidad de medida (A)	Costo Unitario (B)	Importe a acumular (A *B=C)
51880	Ángel Gerardo Islas Maldonado	Espectacular	M2	11 X 4	44	300.00	13,200.00
			M2	8 X 4	32	300.00	9,600.00
			M2	10 X 5	50	300.00	15,000.00
			M2	9 X 5	45	300.00	13,500.00

Id Candidato	Nombre del Candidato	Concepto	Unidad de Medida	Medidas	Unidad de medida (A)	Costo Unitario (B)	Importe a acumular (A *B=C)
			M2	9 X 5	45	300.00	13,500.00
			M2	12 X 6	72	300.00	21,600.00
			M2	12 X 6	72	300.00	21,600.00
			M2	5 X 6	30	300.00	9,000.00
			M2	8 X 4	32	300.00	9,600.00
			M2	8 X 4	32	300.00	9,600.00
			Total				136,200.00

Es menester señalar, que por cuanto hace a las tres bardas objeto de la presente observación, la Sala Regional dejó intocado el cálculo de las mismas, por lo que únicamente se realizara la suma con el monto actualizado de los diez espectaculares, tomándose en cuenta para dicha operación el monto original de las bardas como se señaló en el Dictamen **INE/CG1165/2018**, mismo que para pronta referencia se detalla a continuación:

Id Candidato	Nombre del Candidato	Concepto	Unidad de Medida	Unidad de medida (A)	Costo Unitario (B)	Importe a acumular (A *B=C)
51880	Ángel Gerardo Islas Maldonado	Bardas	Pieza	3	1,393.00	4,176.00
			Total			4,176.00

Por lo tanto, de la modificación al Dictamen Consolidado ordenada dentro de la ejecutoria que por esta vía se acata, se hace constar que el monto total a sancionar por cuanto hace a los diez espectaculares (\$136,200.00) y las tres bardas (\$4,176.00) es de \$140,376.00 (ciento cuarenta mil trescientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.), por lo que se procederá a realizar los cambios conducentes en la Resolución de mérito.

7. Modificación a la Resolución INE/CG1166/2018.

En cumplimiento con lo mandatado por la Sala Regional, se procede a modificar la resolución **INE/CG1166/2018** en lo tocante a su considerando **36.7**, en los siguientes términos:

36.7 NUEVA ALIANZA

(...)

h) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones: **6_C21_P2** (...)

(...)

h) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras de los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización:

Visto lo anterior, a continuación, se presentan las conclusiones finales sancionatorias determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado.

No.	Conclusión	Monto involucrado
6_C21_P2	<i>"El sujeto obligado omitió reportar el gasto de espectaculares y propaganda en vía pública, por un monto de \$140,376.00"</i>	\$140,376.00
(...)		

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de mérito, se hicieron del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara las irregularidades

detectadas; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar las observaciones realizadas.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los candidatos involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña materia de estudio, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6 del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de sus candidatos las observaciones que se detallan en el oficio referido en el análisis de la conclusión. Esto, a efecto que los candidatos presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido político, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de las conductas materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los*

sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”

Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el capítulo III “*DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS*” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de **Campaña**.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “*el candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior.*”

De lo anterior se desprende, que no obstante que el sujeto obligado haya incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional

Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.

Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren

fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación²:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad

² Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del partido no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante las conductas observadas, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de las conductas infractoras de mérito, al partido político pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las que es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado las diversas conductas que violentan los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra los mismos bienes jurídicos tutelados; por cuestión de método, para facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten.

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a) Valor protegido o trascendencia de la norma.
- b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto.
- c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.
- d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
- e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
- f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.
- g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
- h) La capacidad económica del sujeto infractor.

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la

comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

En relación con las irregularidades identificadas en las conclusiones **6_C21_P2** y (...) del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar sus egresos por concepto de gasto de espectaculares y propaganda en vía pública realizados durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla.

En el caso a estudio, las faltas corresponden a una omisión del sujeto obligado consistente en omitir reportar gastos realizados, durante la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la entidad referida, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.³

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que ampara los gastos realizados, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refieren las irregularidades observadas:

<i>“El sujeto obligado omitió reportar el gasto de espectaculares y propaganda en vía pública. Por un monto de \$140,376.00”</i>
(...)

³ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el resultado de la comisión de las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

Previo al análisis de la norma transgredida es relevante señalar que los monitoreos de medios constituyen un mecanismo previsto en los Reglamentos aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que le permiten a la autoridad fiscalizadora verificar la veracidad de la información proporcionada por los partidos políticos y coaliciones en sus informes; ya que se trata de un conjunto de actividades diseñadas para medir, analizar y procesar en forma continua, la información emitida por medios de comunicación electrónicos, impresos o alternos, respecto de un tema, lugar y tiempo determinados, con el registro y representación objetiva de los promocionales, anuncios, programas, entre otros, objeto del monitoreo; según señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-43/2006.

De igual manera, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en el SUP-RAP-86/2007 ha definido al monitoreo en materia de fiscalización como “como una herramienta idónea para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y fiscalización de las actividades de los partidos políticos, encomendadas a las autoridades electorales, ya que a través de éstos se tiende a garantizar la equidad en la difusión de los actos proselitistas de los partidos políticos; medir los gastos de inversión en medios de comunicación de dichas entidades de interés público y apoyar la fiscalización de los institutos políticos para prevenir que se rebasen los topes de campaña, entre otros aspectos”.

Bajo esta línea, surgió el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos como un instrumento de medición que permite a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, a través de las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales, recabar información y documentación soporte sobre

inserciones en prensa y anuncios espectaculares colocados en la vía pública con la finalidad de cotejarlo con lo reportado por los partidos políticos y coaliciones en sus Informes de Campaña, con el fin de verificar que todos los gastos realizados hayan sido debidamente registrados en su contabilidad y reportados en los Informes correspondientes.

Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar la realización de monitoreos, se encuentra regulada en el artículo 318 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra señala:

“Artículo 318.

Monitoreo en diarios, revistas y otros medios impresos

- 1. La Comisión, a través de la Unidad Técnica, realizará las gestiones necesarias para llevar a cabo monitoreo en diarios, revistas y otros medios impresos tendentes a obtener el voto o promover a los precandidatos, candidatos y candidatos independientes a cargo de elección popular.*
- 2. Los resultados obtenidos en el monitoreo serán conciliados con lo reportado por los partidos, coaliciones y candidatos y aspirantes en los informes de ingresos y gastos aplicados a las precampañas y campañas.*
- 3. La Comisión a propuesta de la Unidad Técnica, establecerá la metodología para el monitoreo en diarios, revistas y otros medios impresos que promuevan a precandidatos y candidatos de los partidos políticos y coaliciones, así como de los candidatos independientes durante los Procesos Electorales.*
- 4. El monitoreo consistirá en reunir, clasificar y revisar la propaganda que se publique en medios impresos locales y de circulación nacional tendentes a obtener o promover a precandidatos o candidatos y candidatos independientes o bien promocionar genéricamente a un partido político y/o coalición durante el Proceso Electoral.*
- 5. El costo de la propaganda de medios impresos no reportados por los partidos políticos; coaliciones, candidatos y aspirantes, se determinará conforme a lo establecido en el Artículo 27 del presente Reglamento.*
- 6. El monto de la propaganda no reportada o conciliada por los partidos políticos y aspirantes se acumulará a los gastos de precampaña de la elección de que se trate.*
- 7. El monto de la propaganda no reportada o no reconocida por los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, durante los procesos electorales se acumulará a los gastos de campaña de la elección de que se*

trate y de ser el caso, se prorratará en los términos que establece el Reglamento.

8. El periodo de monitoreo de medios impresos para precampaña dará inicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226 de la Ley de Instituciones, y para campaña local, deberá ser determinado conforme a los acuerdos que para tal efecto apruebe el Consejo General.

9. El periodo de monitoreo de medios impresos para campaña dará inicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley de Instituciones.

10. La Comisión podrá solicitar el apoyo de la Coordinación Nacional de Comunicación Social (CNCS) y de la estructura desconcentrada del Instituto con el objeto de hacerse llegar de elementos de prueba suficientes a través del monitoreo de la publicidad en diarios, revistas y otros medios impresos durante las precampañas y campañas.

11. La Unidad Técnica realizará conciliaciones semanales de las muestras o testigos incorporadas en el sistema en línea de contabilidad, contra lo detectado en el monitoreo y pondrá a disposición del partido, coalición o candidato independiente los resultados.”

Como puede apreciarse, el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos contribuye a la construcción de condiciones de credibilidad y confianza, al incorporar medidas novedosas para fiscalizar eficientemente el manejo administrativo y financiero de las campañas políticas; ya que permite a la Unidad de Fiscalización cruzar la información a través de la detección de anuncios espectaculares colocados en la vía pública y de la búsqueda de información en medios impresos de circulación nacional y local, respecto de toda aquella publicidad y propaganda para cotejarlos con lo reportado por los partidos y coaliciones bajo este rubro; por lo que se configura como un mecanismo que permite cumplir cabalmente con el procedimiento de auditoría y verificar la aplicación de recursos para detectar oportunamente una posible omisión de gastos.

Ahora bien, dada la naturaleza y finalidad de los monitoreos, es inconcuso que este sistema constituye una herramienta indispensable para verificar el cumplimiento de las normas en materia de financiamiento, lo cual pone en evidencia que se trata de instrumentos fiables y dotados de valor probatorio para determinar las posibles infracciones cometidas a la normatividad electoral, por ser esa precisamente la función para la cual fueron diseñados en la legislación.

En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. De esta forma, si bien el la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su artículo 462, numeral 2 que sólo las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, mientras que las pruebas técnicas harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente; la Sala Superior ha señalado que cuando se trata de imágenes, es casi imposible hacerlas constar en un documento, pues para describirlas de manera exacta es necesario utilizar una gran cantidad palabras, lo cual haría casi imposible el intento de consignar en un documento el resultado de un monitoreo que comprenda varios elementos registrados.

Por tanto, en casos como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga costar los resultados en medios electrónicos para considerarlos como pruebas con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos realizados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Entenderlo de distinta manera, se traduciría en una actividad inocua, en tanto que los monitoreos carecerían de razón; según se enfatiza en el SUP-RAP 133/2012 en donde se asigna pleno valor probatorio a los Monitoreos realizados por el Instituto Federal Electoral en ejercicio de sus atribuciones.

Es preciso mencionar que la *ratio essendis* de este criterio se encuentra recogido en la Jurisprudencia 24/2010, aprobada por la Sala Superior en la sesión pública celebrada el cuatro de agosto de dos mil diez; misma que señala que:

“...los testigos de grabación, producidos por el Instituto Federal Electoral, constituyen pruebas técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno, porque son obtenidos por el propio Instituto, al realizar el monitoreo, para verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión de promocionales en radio y televisión.”

Por lo anterior, se colige que los resultados del monitoreo que dieron origen a la presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública en ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no obra en la revisión de los informes de campaña prueba alguna en contrario que sirva para desvirtuar

los resultados del monitoreo, como podría ser otro documento elaborado por la propia autoridad, cuyo contenido diverja del informe, según se establece en el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-117/2010.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse diversas faltas sustanciales consistentes en no reportar los gastos realizados durante el periodo de campaña, mismo que carecen de objeto partidista, se vulneran sustancialmente los principios de transparencia y de certeza en el origen de los recursos.

Así las cosas, las faltas sustanciales que traen consigo la no rendición de cuentas, impiden garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito violó los valores sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

El sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos⁴ y 127 del Reglamento de Fiscalización⁵, mismos que a la letra señalan:

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán

⁴ Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes: b) Informes de Campaña: Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; (...)"

⁵ "Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad."

estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la hipótesis normativa prevista en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos mediante la verificación oportuna, al contar con la documentación soporte de las cuentas por pagar con saldos a la conclusión de la campaña.

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al sujeto obligado se traducen en **faltas** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que las infracciones deben calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICION DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

(...)

Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

Conclusión 6 C21 P2

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.

- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$140,376.00** (ciento cuarenta mil trescientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁶

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a),

⁶ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

fracciones I y II del ordenamiento en cita, no son aptas para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor, una amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente (ahora Unidades de Medida y Actualización), serían poco idóneas para disuadir las conductas infractoras como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al ente político es de índole económica equivalente al **100%** (cien por ciento) sobre el monto involucrado **\$140,376.00** (ciento cuarenta mil trescientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de **\$140,376.00** (ciento cuarenta mil trescientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.)

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al **Nueva Alianza**, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción hasta del 25% (**veinticinco por ciento**) de la **ministración** mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$140,376.00** (ciento cuarenta mil trescientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.)

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

(...)

RESUELVE

(...)

SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando **36.7** de la presente Resolución, se imponen a **Nueva Alianza**, las siguientes sanciones:

(...)

h) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo:

Conclusión 6_C21_P2.

Una reducción hasta del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$140,376.00** (ciento cuarenta mil trescientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.).

(...)

8. Que la sanción originalmente impuesta al **Partido Nueva Alianza** en el inciso **h)** conclusión **6_C21_P2** del considerando **36.7** de la Resolución **INE/CG1166/2018** resolutivo **TERCERO**, tuvo modificaciones que se reflejan de la siguiente manera:

Resolución INE/CG1166/2018		Acuerdo por el que se da cumplimiento al SCM-RAP-78/2018	
Inciso h) Conclusión 6_C21_P2	Sanción	Inciso h) Conclusión 6_CP21_P2	Sanción
"6_C21_P2. El sujeto obligado omitió reportar el gasto de espectaculares y propaganda en vía pública. Por un monto de \$444,976.00".	Conclusión 6_C21_P2 Una reducción hasta del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$444,976.00 (cuatrocientos cuarenta y cuatro mil novecientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.).	El sujeto obligado omitió reportar el gasto de espectaculares y propaganda en vía pública. Por un monto de \$140,376.00	Conclusión 6_C21_P2 Una reducción hasta del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$140,376.00 (ciento cuarenta mil trescientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.).

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,

numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

A C U E R D A

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado **INE/CG1165/2018**, y de la Resolución **INE/CG1166/2018**, aprobada en sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Puebla, en los términos precisados en los Considerandos **6, 7 y 8** del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Notifíquese el contenido del presente Acuerdo al Partido Nueva Alianza.

TERCERO. Infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en Ciudad de México, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SCM-RAP-78/2018** dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo.

CUARTO. En términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya causado estado; y los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas en la presente determinación, serán destinados organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, en los términos de las disposiciones aplicables.

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1289/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SG-RAP-209/2018 Y ACUMULADOS

A N T E C E D E N T E S

I. En sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución **INE/CG880/2018** respecto del procedimiento de fiscalización identificado como **INE/Q-COF-UTF/580/2018/JAL**.

II. Recursos de apelación.

- a) El diez de agosto de dos mil dieciocho, el representante propietario del partido Movimiento Ciudadano, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, interpuso recurso de apelación para controvertir la citada resolución, recibándose el dieciséis de agosto en la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en adelante Sala Regional Guadalajara), quién ordenó registrar dicha impugnación con la clave de expediente **SG-RAP-209/2018**.
- b) Asimismo, en la misma fecha, el C. Gerardo Uvaldo Ochoa Alvarado, promovió recurso de apelación para controvertir la citada resolución, el cual se recibió el dieciocho de agosto en la citada Sala Regional, y se acordó registrar el medio de impugnación con la clave **SG-RAP-215/2018**.
- c) Por último, el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, el C. Ramón Sierra Cabrera, interpuso recurso de apelación para controvertir la citada resolución, recibándose las respectivas constancias, el veinte de agosto en la Sala Regional Guadalajara y acordándose registrar el medio de impugnación con la clave **SG-RAP-251/2018** para la sustanciación correspondiente.

III. Acuerdo de admisión. Respecto a los recursos de apelación **SG-RAP-209/2018**, **SG-RAP-215/2018** y **SG-RAP-251/2018**, en su oportunidad, los Magistrados Instructores admitieron los asuntos, y al no existir diligencias pendientes por desahogar o pruebas por recabar, determinaron el cierre de instrucción.

IV. El tres de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Regional Guadalajara resolvió acumular los escritos de demanda que motivaron la integración de los expedientes de los recursos de apelación, en este sentido, los medios de impugnación identificados con las claves **SG-RAP-215/2018** y **SG-RAP-251/2018**, se acumularon al diverso recurso de apelación radicado con el número **SG-RAP-209/2018**, por ser éste el que se recibió primero en la Oficialía de Partes de la Sala Regional Guadalajara, integrándose el expediente **SG-RAP-209/2018 y Acumulados**.

V. Desahogado el trámite correspondiente, en la misma sesión pública de tres de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Regional Guadalajara resolvió el recurso referido, determinando lo que a la letra se transcribe:

“(…)

RESUELVE

PRIMERO. *Se acumulan los recursos de apelación SG-RAP-215/2018 y SG-RAP-251/2018, al identificado con la clave SG-RAP-209/2018.*

En consecuencia, se debe glosar copia certificada de los Puntos Resolutivos de la presente sentencia a los autos de los expedientes acumulados.

SEGUNDO. *Se **modifica** la resolución impugnada, para los efectos puntualizados en el Considerando Sexto de esta ejecutoria.*

“(…)”

V. Toda vez que en la ejecutoria se ordenó a este Consejo General emitir una nueva determinación para lo cual la autoridad responsable deberá verificar de nueva cuenta el procedimiento previsto en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización a fin de determinar el costo de producción de videos con características similares a los no reportados por los incoados de forma razonable conforme a la zona geográfica que corresponde, y solo en el caso de que la información correspondiente al estado de Jalisco, sus Distritos Electorales o municipios no sea suficiente, deberá acudir al segundo supuesto previsto en el numeral 2, del artículo mencionado, es decir, considerar el costo de una entidad federativa con ingresos per cápita similares, debiendo en cualquiera de los dos casos señalados, motivar

debidamente la determinación. Así, de conformidad al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c), d), g) y o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización presentó el Proyecto de Acuerdo correspondiente.

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a) y n) de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos a) y j); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer y pronunciarse sobre los gastos de producción de quince (15) videos de los cuales no se encontraron pólizas que sustentaran su debido reporte en el Sistema Integral de Fiscalización, toda vez que se detectaron que tienen características profesionales de producción.

2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso el recurso de apelación identificado como **SG-RAP-209/2018 y Acumulados**.

3. Que el tres de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Regional Guadalajara resolvió **modificar** la Resolución identificada con el número **INE/CG880/2018**, dictada por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, misma que fue impugnada por el Partido Movimiento Ciudadano y los CC. Gerardo Uvaldo Ochoa Alvarado y Ramón Sierra Cabrera, para los efectos precisados en la ejecutoria. A fin de dar cumplimiento a los mismos, se procederá a atender a cabalidad las bases establecidas en la sentencia precisada.

4. Que por lo anterior y en razón de los Considerandos **QUINTO. Estudio de fondo y SEXTO. Efectos** de la sentencia **SG-RAP-209/2018 y Acumulados**, la Sala Regional Guadalajara, determinó **fundados** los agravios hechos valer por los tres apelantes como a continuación se transcribe:

“(…)

QUINTO. Estudio de fondo

(...)

Método de estudio.

El estudio de los agravios formulados por los apelantes se realizará en forma diversa al orden por ellos planteado. En ese sentido; por cuestión de método, primeramente, se dará respuesta a los argumentos de agravio identificados con los números 2 y 3 hechos valer por Movimiento Ciudadano y Gerardo Uvaldo Ochoa Alvarado; posteriormente se abordarán los agravios 1, 3 y 4 de Ramón Sierra Cabrera; y finalmente se dará respuesta en forma conjunta a los agravios 1 y 4 de Movimiento Ciudadano y Ochoa Alvarado, así como el 2 de Ramón Sierra Cabrera.

Lo anterior, sin que la metodología de estudio que se propone irroque algún perjuicio a los actores, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados.

*Como apoyo de lo anterior, se cita el contenido de la jurisprudencia de rubro: **AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN**¹.*

(...)

Estudio de los agravios 1 y 4 de Movimiento Ciudadano y su candidato; así como el 2 de Ramón Sierra.

Conforme a lo señalado en la síntesis de los agravios, los tres apelantes se duelen de la decisión de la autoridad responsable en la que tomó el costo de los videos cuyo gasto no fue reportado en base a una cotización existente en el estado de Tamaulipas.

En efecto, de la revisión de la resolución impugnada se constata que, para imponer la sanción correspondiente a los imputados, la responsable fijó en el capítulo atinente a la "Determinación del monto involucrado" el precio unitario de producción de cada video en \$2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.), con base a un precio de cotización existe en el estado de Tamaulipas, tal como lo aseveran los apelantes.

¹ Vigente en el Apéndice (actualización 2001=, Tomo VIII, Jurisprudencia Electoral, Materia: Electoral, Tesis: 4, Página 6.

Como se anticipó, para sostener su reclamo los actores señalan que en la resolución impugnada no se desprende con objetividad si se trata o no de videos con el costo asignado, porque no se cuenta con ningún catálogo o matriz de precios, y que se dejó de motivar la resolución impugnada al no proporcionar la matriz de costos.

También señalan, que al no expresarse en la resolución el origen legal del costo que se otorgó a los videos, la misma carece de fundamentación debido a que no basta con citar un precepto legal, sino que se debe citar una ley, reglamento o documento publicado con anterioridad al hecho, donde se contenga el precio que debe otorgarse a cada video e indican, que de no existir un catálogo de costos el actuar correcto de la autoridad consistía en acudir al desahogo de una prueba pericial.

*Los agravios son **fundados** de acuerdo a lo que se expone a continuación:*

En el marco de las reformas constitucionales y legales del sistema de fiscalización en materia electoral del año dos mil catorce, en el reglamento de la materia se estableció un procedimiento para determinar el valor de bienes o servicios no reportados, sobrevaluados o subvaluados con bases objetivas, con el fin de otorgar certeza a los sujetos obligados.

La reforma al reglamento obedeció a la necesidad de contar con Lineamientos homogéneos de contabilidad, aplicables a todos los sujetos obligados en los ámbitos federal y local.

Conforme a lo previsto en el artículo 27 del reglamento de fiscalización, si de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, las autoridades responsables de la fiscalización determinan gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente:

A. *Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio.*

B. *Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.*

C. *Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado.*

D. La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.

*E. Para su determinación, **el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.***

*F. Con base en los valores descritos en los numerales anteriores y con la información recabada durante el proceso de fiscalización, la Unidad Técnica **deberá elaborar una matriz de precios** con información homogénea y comparable, para lo cual:*

- Deberá tomarse en cuenta **la información relativa al municipio, Distrito o entidad federativa de que se trate;** y,*
- **Solo en caso de no existir información suficiente en la entidad federativa involucrada,** se podrá considerar aquella de entidades federativas que se cuenten con un Ingreso per cápita semejante, de conformidad a la última información publicada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística.*

*G. Únicamente para la **valuación de los gastos no reportados**, la Unidad Técnica **deberá utilizar el valor más alto de la matriz de precios**, correspondiente al gasto específico no reportado.*

*H. Una vez **determinado el valor de los gastos no reportados** se procederá a su **acumulación**, según se corresponda, **a los gastos** para la obtención del apoyo ciudadano, de las precampañas o **campañas beneficiadas**.*

*Cabe señalar, que al resolver el recurso de apelación **SUP-RAP-207/2014 y acumulados**, la Sala Superior determinó que si bien en el referido artículo 27 en el numeral 1, inciso e) se señala que los gastos omitidos serán cotizados conforme al **“valor razonable”**; y en el diverso numeral 3 del mismo precepto se establece que el costo de los citados gastos serán determinados conforme al **“valor más alto”** de la matriz de precios que al efecto realice la autoridad; de una interpretación sistemática y funcional de las reglas de valuación establecidas en los artículos 25, 26 y 27 del capítulo 3 del Reglamento de Fiscalización, el procedimiento de valuación se debe realizar conforme al criterio de “valor razonable”.*

De esta manera, determinó la Sala Superior que, a partir de la obtención del valor razonable de los bienes y servicios, la autoridad fiscalizadora debe

*realizar una matriz de precios con información homogénea y comparable, para lo cual deberá tomar en cuenta la información relativa al **municipio, Distrito o entidad federativa** de que se trate, según se dispone en la primera parte del numeral 2, artículo 27 del Reglamento de Fiscalización.*

Asimismo, destacó que mediante la reforma al Reglamento en diciembre de dos mil dieciséis, se identificaron problemas para la obtención de precios comparables, pues en algunas ocasiones la información sólo se encontraba disponible para entidades federativas distintas a aquella en la que se detectó el gasto.

*Por ello, se estableció la posibilidad de obtener información del Registro Nacional de Proveedores (artículo 27, numeral 1, inciso d), del Reglamento de Fiscalización), y en base (sic) al segundo supuesto al numeral 2, del multicitado artículo 27 del Reglamento, que **en caso de que no exista información suficiente** en la entidad federativa involucrada, se pueda considerar aquella de entidades federativas que se cuenten con un Ingreso per cápita semejante, de conformidad a la última información publicada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística.*

*Empero, cabe destacar que **solo en aquellos casos donde no se encuentre información suficiente de la entidad en la que se realizó el gasto, se podrá recurrir a cotizaciones de proveedores de otras entidades federativas** distintas con ingreso per cápita semejante, pues lo que se busca es obtener un precio objetivo del bien o servicio correspondiente, y esa cotización puede obtenerse de una forma más clara cuando se requiere información en el propio sitio donde se cometió la infracción.*

*En consecuencia, si bien puede considerarse que el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización otorga a la autoridad administrativa la facultad de discernir la manera de allegarse de la información idónea para la conformación de la matriz de precios, lo cierto es que, conforme al reglamento de la materia, **primero debe procurar obtener la información relativa al municipio, Distrito o entidad** donde se cometió la infracción, y solo en caso de que la información solo se encuentre disponible en otras entidades federativas, acudir a esta última información*

Desde luego, en el segundo de los casos, la autoridad fiscalizadora debe exponer las razones por las que se vio compelida a conformar una matriz de precios con cotizaciones provenientes de una entidad federativa distinta a aquella donde se erogó el gasto omitido.

Caso concreto

En el caso concreto, a decir de la autoridad responsable se observa a fojas 54 de la resolución impugnada, que para determinar el monto involucrado, de los gastos no reportados por el partido actor, se procedió conforme a lo siguiente:

- *Sostuvo que procedió a identificar el tipo de bien o servicios recibido y sus condiciones de uso y beneficio para determinar un valor razonable, considerando, además, la información recabada durante el proceso de fiscalización, la presentada por los sujetos obligados, la información recabada de las cámaras o asociaciones del ramo y el Registro Nacional de Proveedores para elaborar una matriz de precios.*
- *Una vez identificados los gastos no registrados, indicó que utilizó el valor más alto de la matriz de precios para aplicarlo a los ingresos y egresos que no reporten.*
- *Señaló que en la matriz de precios consideró los costos que se encuentran registrados ante esa autoridad, considerando características similares a los registrados **por otros partidos en la entidad, o en otras entidades** con Ingresos per cápita similares.*

Finalmente, a fojas 55 de la propia resolución impugnada se advierte que para determinar el monto del gasto omitido tomó como base una cotización correspondiente al Estado de Tamaulipas e indicando que la fundamentación y motivación para que, en el caso se tomara el valor registrado en otra entidad federativa, se contiene en el anexo único de la propia resolución.

Para justificar lo anterior, en el referido anexo, la responsable textualmente expuso lo siguiente:

“Sobre el origen de la Información”:

De acuerdo a las indicaciones señaladas en el artículo 27, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a calcular el ingreso per cápita por entidad federativa de conformidad a la última información publicada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), referente a PIB a precios corrientes, correspondientes al 2016, así como los datos referentes a la población provenientes de la Encuesta Intercensal 2015.

Con los datos obtenidos del INEGI, se determinó el ingreso per cápita por entidad, mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

PIBpc=PIB/Población.

Una vez obtenido los datos del ingreso per cápita, se aplicó la fórmula para crear intervalos de datos no agrupados en cuartiles, elaborando así un tabulador que muestra las diferencias menores a 17 millones de pesos, siendo éste, el dato redondeado de la diferencia mayor encontrada entre las posiciones ordenadas de los ingresos per cápita por entidad federativa.

Así pues, la segmentación de los datos en cuartiles permite identificar aquellas regiones geográficas con ingreso per cápita similar”

Asimismo, del examen del anexo único, se advierte que la matriz de precio conformada por la Unidad de Fiscalización para el caso que nos ocupa, incluyó cotizaciones de los estados de Guanajuato, Guerrero y Tamaulipas.

Como se ve, ni en la resolución impugnada ni en su anexo se emiten argumentos que expliquen por qué se omitió conformar una matriz de precios con base en información obtenida en el estado de Jalisco, de tal forma que válidamente se pudiera determinar el precio del gasto omitido a partir de información proveniente de una entidad federativa distinta.

Es decir, la autoridad responsable no justifica por qué no procedió en términos de lo previsto en la primera parte del numeral 2 del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, conforme al cual debía elaborar la matriz de precios a partir de la información existente en Jalisco.

En efecto, como se anticipó, conforme a lo expuesto por la propia autoridad responsable en el apartado concerniente a la “Determinación del monto involucrado” de su resolución, la motivación y fundamentación correspondiente para tomar el valor de producción de un video en otra entidad federativa supuestamente se insertó en el Anexo Único de la propia resolución.

Sin embargo, la revisión de dicho anexo, remitido por la autoridad responsable a virtud del requerimiento formulado durante la etapa de instrucción del procedimiento, corrobora que fue omisa en justificar los motivos por los que consideró pertinente tomar el precio de los bienes no reportados en base a la información existente en una entidad federativa distinta a la que se cometió la infracción.

En sus argumentos, la autoridad responsable se limitó a justificar que tomaba en cuenta el origen de información existente en el estado de Tamaulipas porque tiene un ingreso per cápita similar al de Jalisco, pero no expone las razones o causas por las que consideró procedente discriminar el primer criterio de

designación de costo del bien, que se establece en el primer supuesto analizado del numeral 2, artículo 27, del Reglamento de Fiscalización.

Además de lo anterior, destaca que la matriz de precios se conformó con cotizaciones de producción de videos en estados que de acuerdo a la propia información obtenida por la responsable no tienen un ingreso per cápita similar² al de Jalisco (Guanajuato y Guerrero), de manera que, desde tal óptica, resulta fundado el agravio de los impugnantes donde señalan que no se justificó la determinación para tomar el costo de producción de un video en Tamaulipas a fin de imponer la sanción respectiva.

La violación al procedimiento previsto en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, se ve corroborada si tomamos en cuenta que a fojas 48 de la propia resolución impugnada se informa por lo menos de una factura por servicio de edición y producción de videos (como los presuntamente omitidos por el partido actor) aportada por el partido actor por un servicio recibido precisamente en Acatlán de Juárez.

Se trata de una prueba que arroja fuertes indicios de que en Jalisco sí es posible obtener cotizaciones para conformar la matriz de precios para determinar el monto del gasto omitido por el actor en términos de lo establecida en la primera parte del numeral 2, del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización.

Lo anterior es así, porque si en su momento los incoados pudieron cotizar y justificar el pago de producción de diez videos ante la autoridad responsable, resulta poco verosímil que en el estado de Jalisco o sus municipios la autoridad responsable estuviera imposibilitada para recabar información suficiente a fin de elaborar una matriz de precios que determine con fiabilidad el costo de producción de un video en la zona geográfica donde se cometió la infracción.

*En resumen, es **fundado** el agravio en estudio, por lo que hace a la determinación de la autoridad responsable de tomar los costos de producción de un video en el estado de Tamaulipas sin exponer razonamiento alguno que justifique la utilización de información generada en una entidad federativa diferente a la del lugar en que se cometió la infracción.*

SEXTO. Efectos de la sentencia

En virtud de lo analizado por esta Sala Regional, en el presente asunto lo procedente es, de conformidad con lo previsto en el artículo 47, apartado 1, de

² Véase mapa de "Similitud Ingreso Per Cápita Nacional" plasmado en el apartado INPERCAP y Matriz de precios del apartado Local y Federal, contenidos en el Anexo Único de la resolución impugnada.

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, **modificar** la resolución reclamada para los efectos siguientes:

- Para que la autoridad responsable verifique de nueva cuenta el procedimiento previsto en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización a fin de determinar el costo de producción de un video con características similares a los no reportados por los incoados de forma razonable conforme a la zona geográfica que corresponde, y solo en el caso de que la información correspondiente a Jalisco, sus Distritos Electorales o municipios no sea suficiente, deberá acudir al segundo supuesto previsto en el numeral 2, del artículo mencionado, (considerar el costo de una entidad federativa con ingresos per cápita similares) debiendo en cualquiera de los dos casos señalados, **motivar** debidamente su determinación.
- Una vez realizado lo anterior, la autoridad responsable deberá emitir una nueva resolución de la queja interpuesta, todo lo cual deberá realizar en un plazo máximo de **ocho días naturales** contados a partir de que sea notificado de la presente Resolución, en el entendido que las consideraciones que no fueron materia de impugnación en esta instancia federal, o bien, que ya fueron confirmadas en la presente Resolución por esta Sala Regional, deberán quedar intocadas.
- En atención a lo previsto en el principio jurídico de non reformatio in peius (no modificar en perjuicio) se hace saber a la autoridad responsable que la sanción que en su caso, pueda imponer a los denunciados, no puede sobrepasar los límites de la que en esta sentencia se deja sin efectos.
- Una vez que la autoridad responsable cumpla con lo ordenado, deberá **informar** a esta Sala Regional la determinación tomada, dentro de las **veinticuatro horas** siguientes a que ello ocurra.

(...)"

Por lo anterior, esta autoridad debe emitir una nueva determinación considerando los razonamientos hechos por la Sala Regional Guadalajara.

5. Que al quedar intocadas las demás consideraciones que sustentan la Resolución identificada con el número INE/CG880/2018, este Consejo General únicamente se abocará a motivar la determinación del costo de producción de los videos con características similares a los no reportados por los incoados conforme a lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, en el procedimiento

de queja en materia de fiscalización identificado como INE/Q-COF-UTF/580/2018/JAL.

En ese sentido, de conformidad con el considerando “**SEXTO. Efectos de la sentencia**”, esta autoridad emitirá una nueva determinación, con la finalidad de realizar el estudio y análisis de lo siguiente:

- Verificar de nueva cuenta el procedimiento previsto en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización a fin de determinar el costo de producción de un video con características similares a los no reportados por los incoados de forma razonable conforme a la zona geográfica que corresponde.
- En caso de que esta autoridad detecte que la información correspondiente a Jalisco no sea suficiente, deberá acudir al segundo supuesto previsto en el numeral 2, del artículo mencionado, es decir, considerar el costo de una entidad federativa con ingresos per cápita similares debiendo motivar dicha determinación.
- En su caso, se procederá a realizar de nueva cuenta la individualización e imposición de la sanción correspondiente, de acuerdo con costo que se determine siguiendo lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización.

En ese sentido, las demás consideraciones de la Resolución identificada como INE/CG880/2018 que no hayan sido sujetas a modificación, no serán objeto de análisis en el presente cumplimiento.

Por lo anterior, se procede a dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito de la manera siguiente:

1. Estudio de fondo.

(...)

Determinación del monto involucrado.

En acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara, esta autoridad procedió a realizar un nuevo análisis y búsqueda en la matriz de precios elaborada para el periodo de campaña correspondiente al Proceso Electoral Federal y concurrentes locales 2017-2018, realizando

los procedimientos establecidos en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, esto es, un procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.

Es importante señalar que, para que la matriz de precios cuenta con información homogénea y comparable, la metodología de su elaboración se realizó de la manera siguiente:

A través del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) y de la información recabada por los proveedores externos e instituciones gubernamentales, se reunió la información relacionada con los tipos de bienes o servicios a ser valuados.

Una vez recabada la información necesaria se realizó la depuración, agrupación, y definición de conceptos.

La metodología utilizada para determinar los precios, está basada en el cálculo de frecuencias acumuladas, tomando un nivel de confianza entre 70% y 80% de la muestra; a través de las frecuencias acumuladas, finalmente se estimó el precio alto y bajo del bien o servicio. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización se calculó el ingreso per cápita por entidad federativa atendiendo la solicitud en cuanto a la cobertura de los gastos no reportados.

De este modo, se generó el SINPERCAP (Similitud Ingreso Per Cápita), herramienta que permite la identificación de aquellas regiones geográficas con ingreso per cápita similar y facilitando con ello el alcance territorial fiable del precio seleccionado.

Por lo tanto, el resultado del nuevo análisis se detalla a continuación:

❖ En un primer momento y en cumplimiento a lo señalado por la Sala Regional Guadalajara, esta autoridad procedió a buscar de nueva cuenta el costo de producción de un video con características similares a los no

reportados por los incoados en la zona geográfica que corresponde, en el presente caso, al estado de Jalisco, considerando la información recabada durante el proceso de fiscalización de la campaña correspondiente al Proceso Electoral Federal y concurrentes locales 2017-2018, y asentada en la matriz de precios.

En este sentido, esta autoridad obtuvo lo siguiente:

SUJETO OBLIGADO	ENTIDAD	NOMBRE DEL EMISOR	RFC	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO CON IVA	CANTIDAD
Juntos Haremos Historia (Jalisco)	Jalisco	Fantasmas films S.A. DE C.V.	FFI000302GZ3	Spot	Spot de tv	Producción y postproducción de spot para televisión de Carlos Lomeli, candidato a la gubernatura de Jalisco con duración de 30 segundos.	\$106,554.71	
Por Jalisco al Frente	Jalisco	La covacha gabinete de comunicación S.A DE C.V	CGC110225LU6	Spot	Spot de audio y video	Servicio de producción de spot de tv, radio y redes sociales para beneficio de los siguientes ciudadanos: María Elena Limón García, candidata a presidente municipal por San Pedro Tlaquepaque, Ricardo Zaid Santillán Cortés candidato a presidente municipal por El Salto y Juan Antonio González ora candidato a presidente municipal por Tonalá	\$61,480.00	1
PRD	Jalisco	Ismo consultores s. DE R.L. DE C.V.	ICO15051968A	Servicios profesionales	Producción y edición de video ³	Producción video	\$50,000.00	1
PRI	Jalisco	Nicolás Covarrubias de la Peña	COPN900924611	Spot	Spot de audio y video	Producción de video informativo para spots de campaña	\$48,720.00	1

Como puede observarse en la tabla anterior, de la nueva búsqueda realizada en la matriz de precios, en la entidad de Jalisco, se localizaron gastos por los subconceptos de “spot de tv”, “spot de audio y video”, “producción de video⁴” y “Producción de video informativo para spots de campaña”, sin embargo, los mismos no son semejantes a los que por esta vía se investigan, de conformidad con el artículo 27, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización⁵. Esto es así, en virtud que los videos que se señalan en la tabla anterior son producidos para ser

³Al respecto, resulta necesario aclarar que, si bien en la matriz de precios en la columna “subconcepto del gasto” señala “producción de videos”, estos corresponden a gastos de producción de los mensajes para radio y televisión.

⁴ Al respecto, resulta necesario aclarar que, si bien en la matriz de precios en la columna “subconcepto del gasto” señala “producción de videos”, estos corresponden a gastos de producción de los mensajes para radio y televisión.

⁵ “a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio.”

transmitidos en radio y televisión, lo que implica que la calidad de los mismos sea mucho mayor a los que en el presente asunto se estudian.

Lo anterior se robustece con la respuesta que en su momento dio la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos en la que señaló que los videos objeto de estudio no contienen la **Calidad de video para transmisión de Broadcast**, es decir, manejo de resolución, Códecs tasa de *bit rate* y tipo de compresión para poder ser radiodifundidos, que en la parte conducente se transcribe:

(...)

“Se informa que para el análisis del material enviado se determinaron las siguientes características:

- **Calidad de video para transmisión Broadcast:** Manejo de resolución, Códecs tasa de *bit rate* y tipo de compresión para poder ser radiodifundidos.
- **Producción:** Probable uso de equipos semi-profesionales o profesionales de producción como Cámaras de foto o video semi-profesionales a profesionales, iluminación, microfonía semi-profesional a profesional, grúas, Dolly cam, steady cam, drón, entre otros.
- **Manejo de imagen:** calidad de imagen, encuadres, movimiento de cámaras, definición, uso de imágenes de stock, locaciones.
- **Audio:** Calidad de grabación, locutores, jingles, mezcla de audios.
- **Gráficos:** Diseño, animaciones, calidad de los mismos.
- **Post-producción:** Edición, efectos, mezcla de efectos y animaciones con imágenes.
- **Creatividad:** Uso de guion y contenidos.

De la revisión realizada a los videos se encontró lo siguiente:

(...)

Video 12: Gerardo Ochoa Juntos por este gran proyecto.- Gracias Duración: 1:00 Min	
Calidad de video para transmisión Broadcast	No
Producción	Sí
Imagen	Sí
Audio	Sí
Gráficos	Sí
Post-producción	Sí
Creatividad	Sí

Video 20: Gerardo Ochoa- Sabemos de las dificultades que sufren Duración: 29 Seg.	
<i>Calidad de video para transmisión Broadcast</i>	<i>No</i>
<i>Producción</i>	<i>Sí</i>
<i>Imagen</i>	<i>Sí</i>
<i>Audio</i>	<i>Sí</i>
<i>Gráficos</i>	<i>Sí</i>
<i>Post-producción</i>	<i>Sí</i>
<i>Creatividad</i>	<i>Sí</i>

Video 22: Gerardo Ochoa- Un gran compromiso con las familias Duración: 27 Seg.	
<i>Calidad de video para transmisión Broadcast</i>	<i>No</i>
<i>Producción</i>	<i>Sí</i>
<i>Imagen</i>	<i>Sí</i>
<i>Audio</i>	<i>Sí</i>
<i>Gráficos</i>	<i>Sí</i>
<i>Post-producción</i>	<i>Sí</i>
<i>Creatividad</i>	<i>Sí</i>

Video 24: HAGÁMOSLO POR NUESTROS HIJOS Duración: 27 Seg.	
<i>Calidad de video para transmisión Broadcast</i>	<i>No</i>
<i>Producción</i>	<i>Sí</i>
<i>Imagen</i>	<i>Sí</i>
<i>Audio</i>	<i>Sí</i>
<i>Gráficos</i>	<i>Sí</i>
<i>Post-producción</i>	<i>Sí</i>
<i>Creatividad</i>	<i>Sí</i>

Video 25: Servicios públicos eficientes Duración: 30 Seg.	
<i>Calidad de video para transmisión Broadcast</i>	<i>No</i>
<i>Producción</i>	<i>Sí</i>
<i>Imagen</i>	<i>Sí</i>
<i>Audio</i>	<i>Sí</i>
<i>Gráficos</i>	<i>Sí</i>
<i>Post-producción</i>	<i>Sí</i>
<i>Creatividad</i>	<i>Sí</i>

(...)

Es necesario hacer mención que a fin de evitar transcripciones y repeticiones innecesarias solo se hace referencia a una muestra de los videos analizados por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos donde podemos apreciar las características de los videos

analizados, los cuales en ningún caso cuentan con **Calidad de video para transmisión de Broadcast**.

En otras palabras, los videos identificados en el asunto que nos ocupa no cuentan características similares que puedan ser comparables con los que se señalan en los cuadros anteriores.

Por lo tanto, esta autoridad fiscalizadora procedió a verificar en la matriz de precios atendiendo a lo establecido en el artículo 27 y de conformidad con lo mandatado por el órgano jurisdiccional, en específico en la entidad de Jalisco, sin que se obtuvieran resultados mediante los cuales se pudiera determinar el “*valor razonable*” de los videos que materia de la queja.

Es importante mencionar que, esta autoridad no soslaya lo señalado por la Sala Regional en la página 32, de la ejecutoria que por esta vía se acata, en la que señala que: *“a fojas 48 de la propia resolución impugnada se informa por lo menos de una factura por servicio de edición y producción de videos (como presuntamente omitidos por el partido actor) aportada por el partido actor por un servicio recibido precisamente en Acatlán de Juárez (...) Se trata de una prueba que arroja indicios de que en Jalisco sí es posible obtener cotizaciones para conformar la matriz de precios (...)”*. Sin embargo, de **una nueva búsqueda** como se señala en párrafos anteriores y de conformidad con el artículo 27, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, en el que se establece que al tratarse de gastos no reportados la Unidad Técnica deberá utilizar **el valor más alto de la matriz de precios**, no resulta viable utilizar el mismo costo que utilizó el propio denunciado, sino remitirse al valor más alto de la matriz de precios, sin que de esta se desprendiera un gasto con las mismas características a los videos denunciados en el entidad de Jalisco.

Por lo anterior, si bien en el caso, esta autoridad fiscalizadora al revisar la contabilidad del denunciado y encontrar el gasto relativo al servicio prestado a esté, esta situación sólo arroja un indicio respecto al costo de los videos denunciados, sin embargo, al actualizarse un gasto no reportado, de conformidad con el artículo 27, numeral 3 del Reglamento

de Fiscalización, que en su parte conducente señala que: “Únicamente para la valuación de los gastos no reportados, la Unidad Técnica deberá utilizar el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente al gasto específico no reportado”, por lo anterior, esta autoridad para cumplir con lo ordenado en la citada ejecutoria, se remitió a la matriz de precios y, una vez hecho lo anterior, identificó el gasto con valor más alto y que tuviera semejanza con los conceptos no reportados por el incoado, y no con los montos que el mismo denunciado reportó.

En consecuencia, al no contar con un “*valor razonable*” dentro de la entidad en cuestión, esta autoridad procedió conforme lo señalado el artículo 27, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, es decir al no existir información suficiente en la entidad federativa involucrada, se procedió a considerar aquella de una entidad federativa que se cuente con un ingreso per cápita semejante, de conformidad a la última información publicada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística.

Ahora bien, para valuar el bien requerido, y de acuerdo a las indicaciones señaladas en el artículo 27, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a calcular el ingreso per cápita por entidad federativa de conformidad a la última información publicada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), referente a PIB a precios corrientes, correspondientes al 2016, así como los datos referentes a la población provenientes de la Encuesta Intercensal 2015.

Con los datos obtenidos del INEGI, se determinó el ingreso per cápita por entidad, mediante la aplicación de la siguiente formula: $PIBpc = PIB / Población$.

Así pues, la segmentación de los datos en cuartiles permite identificar aquellas regiones geográficas con ingreso per cápita similar al de Jalisco como sigue:

INGRESO PER CÁPITA POR ENTIDAD FEDERATIVA.

Estado.	Pesos/Habitantes. (*)	Regiones Similares.
Chiapas	61,418	1
Oaxaca	72,298	
Guerrero	76,448	
Tlaxcala	86,450	
Michoacán de Ocampo	100,814	
Puebla	102,702	
Hidalgo	103,611	
México	103,761	
Veracruz de Ignacio de La Llave	109,201	2
Morelos	113,999	
Nayarit	114,463	
Zacatecas	116,671	
Yucatán	133,280	
Durango	133,313	
Guanajuato	135,863	
Sinaloa	145,512	
San Luis Potosí	148,446	3
Colima	160,908	
TAMAULIPAS	162,060	
JALISCO	171,401	
CHIHUAHUA	181,137	
Tabasco	184,700	
Baja california	190,132	
Aguascalientes	195,067	
Quintana Roo	201,533	4
Querétaro	215,090	
Baja California Sur	216,333	
Sonora	228,953	
Coahuila de Zaragoza	233,454	

Estado.	Pesos/Habitantes. (*)	Regiones Similares.
Nuevo León	269,824	
Ciudad de México	358,501	
Campeche	455,449	
total 5,282,791		

Una vez establecido lo anterior, se procede a determinar la entidad aplicable, de conformidad a los siguientes criterios:

“Criterios a utilizar para fijar un valor a los bienes o servicios no reportados como gastos en aquellos casos en los que no se cuente con información suficiente de la entidad a evaluar”.

1. El valor de los bienes o servicios no reportados por el estado deberá de ubicarse conforme a la clasificación expuesta en la columna denominada Regiones Similares.
2. Deberá identificar en el tabulador el rango o posición a la que corresponde la entidad a evaluar.
3. Una vez identificado el rango o posición del estado a evaluar en el tabulador, deberá de considerar el (los) estado(s) **inmediato (s) anterior (es)** para el cálculo del valor del bien o servicio en la entidad buscada excepto el estado de Chiapas.
4. Para el caso del estado de Chiapas se deberá de considerar el (los) estado(s) inmediato (s) posterior (es) para el cálculo del valor del bien o servicio en la entidad buscada.
5. En caso de no encontrar el valor en su región similar podrá utilizar los valores señalados **en la región inmediata anterior o superior**. Para ambos casos el diferencial no deberá exceder un monto superior a 17.000 (millones de pesos).

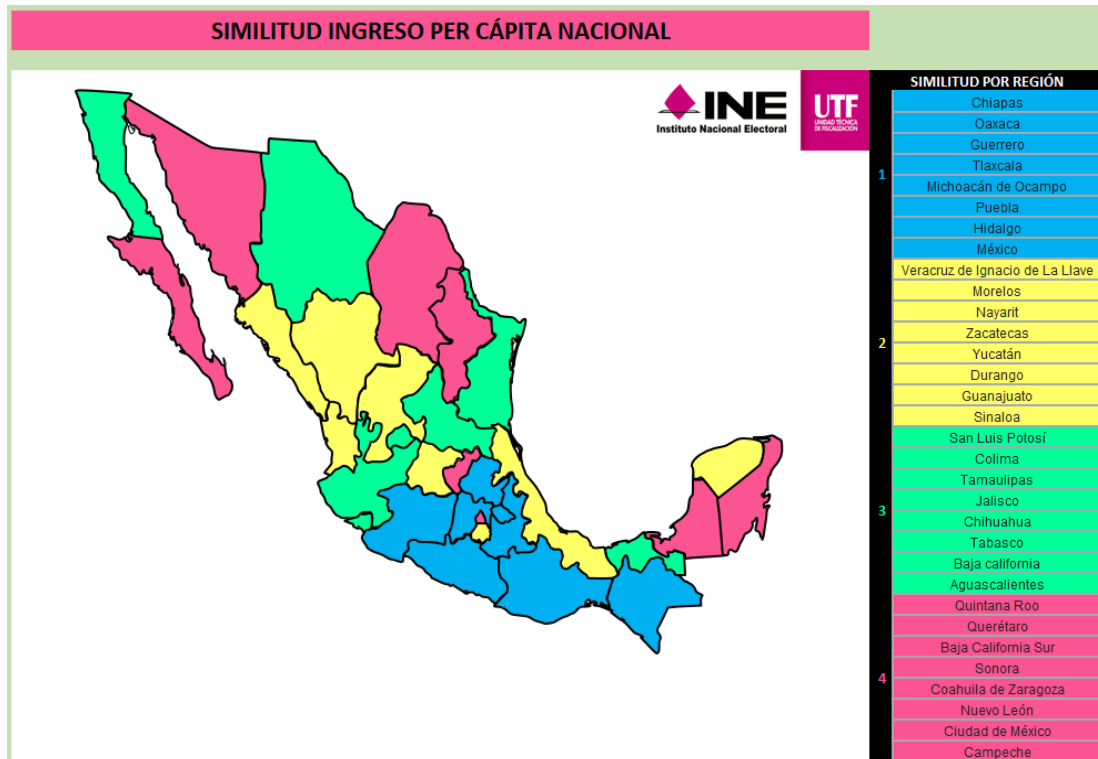
Para los límites superiores como inferiores de los Cuartiles (Q1, Q2, Q3 y Q4), se realizó una tabulación en la que se refleja las diferencias no mayores a 17 millones de pesos.

Como se puede desprender de lo señalado anteriormente, en caso de no encontrar el valor en la región en la que se cometió la falta, se podrá utilizar los valores señalados en la región **inmediata anterior o superior**, en este caso, conforme al cuadro inmediato anterior, **las dos entidades ubicadas de manera inmediata anterior o superior, respecto a Jalisco son Tamaulipas y Chihuahua.**

Ahora bien, de conformidad con el numeral 3 de los criterios establecidos, se tomará la entidad inmediata anterior para el cálculo del valor del bien o servicio. Lo anterior guarda lógica porque **Tamaulipas** es la entidad con el ingreso per cápita **más semejante** al de Jalisco, toda vez que la diferencia entre el primero y el segundo es de 9,341, en otras palabras, es la entidad que guarda menor diferencia de ingreso per cápita entre sí.

Por lo anteriormente razonado, esta autoridad determinó que la entidad con mayor semejanza o con menor diferencia de ingreso per cápita es Tamaulipas, por lo que, de ser caso, será utilizada para determinar el costo de los videos materia de la presente queja.

Para reafirmar lo anterior se inserta el siguiente mapa que contiene las entidades identificadas según las cuatro regiones similares por su ingreso per cápita:



Por las consideraciones anteriores, para cuantificar el costo de los egresos no reportados por concepto producción de quince (15) videos, los cuales contienen características de profesionales de producción o post-producción, se utilizó la metodología en términos del numeral 2, del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, como se describe a continuación:

- ❖ En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran ser comparables con los gastos no reportados.
- ❖ Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o gastos no reportados por el sujeto obligado.
- ❖ En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos obligados, no contenía un registro similar, se procedió a recabar información reportada en el Registro Nacional de Proveedores correspondiente a Tamaulipas:

SUJETO OBLIGADO	ENTIDAD	NOMBRE DEL EMISOR	RFC	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO CON IVA	CANTIDAD
<i>Candidatura independiente</i>	<i>Tamaulipas</i>	Rocío Aracely Reyes García	REGR700820HUA	Spot	Spot de audio y video	Producción de video y fotografía para spot de candidato Juan Manzur	\$25,000.00	1
<i>Por México al frente</i>	<i>Tamaulipas</i>	Sergio Margarito Villanueva Dueñez	VIDS8306067S9	Servicios Profesionales	Fotografía y video	Edición y producción de fotos y videos cortos	\$2,500.00	1

Por tales razones se consideró para determinar el costo del servicio materia del presente acatamiento un proveedor del estado de Tamaulipas.

Como se desprende del cuadro que antecede, los conceptos por producción de videos que más de asemejan a los denunciados en la presente queja son los del emisor Sergio Margarito Villanueva Dueñez.

En consecuencia, el costo unitario de producción de un video promocional corresponde a \$2,500.00.

❖ Una vez obtenido el costo por los gastos no registrados, se procedió a determinar el valor de la forma siguiente:

CANDIDATO	ENTIDAD	CONCEPTO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	IMPORTE QUE DEBE SER CONTABILIZADO
			(A)	(B)	(C)*(D)=(E)
Vicente Javier Verastegui Ostos	Tamaulipas	Servicios profesionales	15	\$2,500.00	\$37,500.00
TOTAL DEL GASTO NO REGISTRADO					\$37,500.00

En consecuencia, el partido incoado omitió reportar gastos por concepto de 15 (quince) videos promocionales, por un importe determinado de **\$37,500.00 (treinta y siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.)**.

En ese tenor, derivado de las consideraciones expuestas, se concluye que los sujetos incoados incumplieron con lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de Ley General de Partidos Políticos y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, por tanto, la queja de mérito debe declararse **fundada** por lo que se refiere al presente apartado.

(...)⁶

⁶ De conformidad con lo ordenado en la sentencia SG-RAP-209/2018 y Acumulados, todo lo siguiente no fue materia de modificación, por lo que queda en los términos originalmente establecidos en el acuerdo INE/CG880/2018.

6. En virtud de que, la autoridad fiscalizadora procedió a motivar debidamente el costo de producción de los videos denunciados, es decir, se argumentó la decisión de utilizar el segundo supuesto previsto en el numeral 2, del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, se concluyó que la determinación del costo quedó en los términos originalmente establecidos en el INE/CG880/2018, en consecuencia, la individualización e imposición de la sanción siguen la misma naturaleza, la cual, en aras de economía procesal y en obvio de repeticiones innecesarias se tiene por reproducidas como si a la letra se insertasen, de conformidad con el INE/CG880/2018.

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y aa); y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

A C U E R D A

PRIMERO. Se **modifica** lo conducente en la Resolución **INE/CG880/2018**, aprobada en sesión extraordinaria, celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, respecto del procedimiento de fiscalización instaurado en contra del partido Movimiento Ciudadano, y de su otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de Acatlán de Juárez, Jalisco, el C. Gerardo Uvaldo Ochoa Alvarado, identificado como **INE/Q-COF-UTF/580/2018**, en los términos precisado en el Considerando **5** del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que informe a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SG-RAP-209/2018 y Acumulados**, remitiéndole para ello copia certificada del mismo.

TERCERO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1290/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SG-RAP-227/2018

A N T E C E D E N T E S

I. En sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución **INE/CG864/2018**, respecto del Procedimiento Administrativo Sancionador de Queja en Materia de Fiscalización, instaurado en contra del C. Gabriel Vásquez Andrade, candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Ayotlán, Jalisco, por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, Identificado con el número de Expediente INE/Q-COF-UTF/366/2018/JAL.

II. Recursos de Apelación. Inconformes con lo anterior, el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, el partido Morena, a través de sus representantes ante el consejo General del Instituto Nacional Electoral, interpuso el recurso de apelación para controvertir lo determinado en la Resolución INE/CG864/2018.

III. Recepción de constancias en la Sala Superior. El veintiuno de agosto del año en curso, presentó en la Oficialía de Partes de la Sala Superior de este Tribunal, el oficio mediante el cual el Secretario del Consejo General remitió el expediente integrado con motivo del presente medio de impugnación.

IV. Remisión de constancias a la Sala Regional Guadalajara. Mediante proveído del veintiuno de agosto del año en curso, la Sala Superior dictaminó, entre otras cosas, remitir la documentación de cuenta a esta Sala Regional, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

V. Turno de la Sala Regional Guadalajara. El veintidós de agosto del año en curso, la Oficialía de Partes de la Sala Regional recibió en el medio de impugnación y, el veinticuatro del mismo mes, la Magistrada Presidenta ordenó integrar el expediente SG-RAP-227/2018, y turnarlo a la Ponencia a su cargo, para su sustanciación.

VI. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el tres de septiembre de dos mil dieciocho, determinando en su Resolutivo ÚNICO, lo que se transcribe a continuación:

“(…)

ÚNICO. *Se modifica la resolución impugnada para los efectos precisados en el Considerando Cuarto de esta ejecutoria.*

(…)”

Lo anterior, a efecto de que la autoridad responsable emita una nueva Resolución, siguiendo los Lineamientos indicados en la parte considerativa de la sentencia que para mayor claridad se transcriben a continuación:

“Para que la autoridad responsable realice de nueva cuenta el procedimiento previsto en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización a fin de determinar de manera fundada y motivada, el costo de los bienes y servicios omitidos (template, equipos de sonido y producción de los videos) de tal forma que se obtengan cotizaciones a valor razonable, sustentadas en información homogénea y comparable.

- *Hecho lo anterior, la autoridad responsable deberá emitir una nueva resolución de la queja interpuesta, todo lo cual deberá realizar en un plazo máximo de ocho días naturales contados a partir de que sea notificada de la presente Resolución. En el entendido que las consideraciones que no fueron materia de impugnación en esta instancia federal, o bien, que ya fueron confirmadas en la presente Resolución por esta Sala Regional, deberán quedar intocadas.*

- *En atención a lo previsto en el principio jurídico de non reformatio in peius (no modificar en perjuicio) se hace saber a la autoridad responsable que la sanción que en su caso, pueda imponer a los denunciados, no puede sobrepasar los límites de la que en esta sentencia se deja sin efectos.*

- *Una vez que la autoridad responsable cumpla con lo ordenado, deberá informar a esta Sala Regional la determinación tomada, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.*

(...)"

VII. Derivado de lo anterior, y en virtud de que no se advierte que la sentencia de mérito disponga cuestiones diversas a las ya citadas, es que la Resolución referida, será únicamente modificada respecto a la determinación de costo, dejando intocado el resto de su contenido, por lo que con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c), d), y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son definitivas e inatacables, se presenta el proyecto de mérito.

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) y aa); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los informes de Campaña de los ingresos y gastos de los Candidatos al cargo de Ayuntamiento correspondientes al Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, en el estado de Jalisco.
2. Que conforme a los artículos 5 y 6 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso del recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica **SG-RAP-227/2018**.
3. Que por lo anterior y en razón de lo establecido en el Considerandos **TERCERO y CUARTO** de la sentencia de mérito, relativo al estudio de fondo y efectos de la sentencia recaída al expediente citado, la Sala Regional Guadalajara

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó lo que a continuación se transcribe en su parte conducente:

“(…)

TERCERO. Estudio de fondo

(…)

III. Incorrecta elaboración de la matriz de precios

(…)

*El recurrente alega que **la autoridad fiscalizadora no expresó cuáles fueron los elementos de prueba que utilizó para identificar el costo de valuación** que se le dio a los supuestos servicios para la producción de los videos omitidos toda vez que se incorporó a la matriz de precios, consignando datos imprecisos e inexactos, por lo que incumplió lo dispuesto en el artículo 27, párrafo 2, del Reglamento de Fiscalización, y vulneró los principios de legalidad, proporcionalidad, de debido proceso, exhaustividad y congruencia.*

*Manifiesta que la autoridad “...**fue omisa en determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar...**” respecto de la tasación de la sanción por equipo de sonido, pues sólo se limitó a establecer la cantidad de la matriz de precios, así como el proveedor más alto; sin embargo, considera que ello fue incorrecto, porque el servicio consistente en la renta de sonido puede ser de un día completo, de una semana o de un mes, dependiendo los precios de cada proveedor.*

Respuesta al agravio.

*A juicio de este órgano jurisdiccional **el agravio es sustancialmente fundado** por las razones que se explican enseguida.*

Elaboración de la matriz de precios

En el marco de las reformas constitucionales y legales del sistema de fiscalización del año dos mil catorce, el Reglamento de Fiscalización estableció el procedimiento de auditoría para determinar el valor de un bien o servicio en beneficio de los sujetos obligados en materia de fiscalización que no hubiera sido reportado ante la autoridad.

La reforma al Reglamento obedeció a la necesidad de contar con Lineamientos homogéneos de contabilidad, aplicables a todos los sujetos obligados en los ámbitos federal y local.

En lo particular, la figura de valuación de las operaciones tuvo su origen en la necesidad de determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados, sustentado con bases objetivas, con el fin de otorgar certeza a los sujetos obligados.

La referida disposición fue confirmada por la Sala Superior de este Tribunal al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-207/2014 y acumulados, en el cual consideró que el procedimiento de valuación está previsto en los artículos 25, 26 y 27 del Capítulo 3, del Reglamento de Fiscalización, en sintonía con aquellos que disponen la obligación de presentar la información financiera, presupuestaria y contable en términos monetarios.

*Específicamente, en el invocado artículo 27, párrafo 1, del Reglamento se prevé que, **para la determinación del valor de los gastos no reportados**, derivados de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto o de la aplicación de cualquier otro procedimiento, las autoridades fiscalizadoras deberán utilizar el procedimiento previsto para la “Determinación del valor de gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados”; por tanto, deberán considerar lo siguiente:*

(...)

*a) Se deberá **identificar el tipo de bien o servicio** recibido y sus condiciones de uso y beneficio.*

*b) Las **condiciones de uso se medirán** en relación con la **disposición geográfica y el tiempo**. El **beneficio** será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.*

*c) Se **deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado**. La información se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.*

*d) Se **deberá identificar los atributos de los bienes o servicios** sujetos de valuación **y sus componentes deberán ser comparables**.*

*e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de **valor razonable**.*

2. Con base en los valores descritos en el numeral anterior, así como con la información recabada durante el proceso de fiscalización, la Unidad Técnica deberá elaborar una Matriz de precios, **con información homogénea y comparable**.

3. Para la valuación de los gastos no reportados, la Unidad Técnica deberá utilizar el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente al gasto específico no reportado.

CUARTO. Efectos de la sentencia.

En virtud de lo analizado por esta Sala Regional, en el presente asunto lo procedente es, de conformidad con lo previsto en el artículo 47, apartado 1, de la Ley de Medios, **modificar** la resolución reclamada para los efectos siguientes:

- Para que la autoridad responsable realice de nueva cuenta el procedimiento previsto en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización a fin de determinar de manera fundada y motivada, el costo de los bienes y servicios omitidos (templete, equipos de sonido y producción de los videos) de tal forma que se obtengan cotizaciones a valor razonable, sustentadas en información homogénea y comparable.

- Hecho lo anterior, la autoridad responsable deberá emitir una nueva resolución de la queja interpuesta, todo lo cual deberá realizar en un plazo máximo de **ocho días naturales** contados a partir de que sea notificada de la presente Resolución. En el entendido que las consideraciones que no fueron materia de impugnación en esta instancia federal, o bien, que ya fueron confirmadas en la presente Resolución por esta Sala Regional, deberán quedar intocadas.

- En atención a lo previsto en el principio jurídico de non reformatio in peius (no modificar en perjuicio) se hace saber a la autoridad responsable que la sanción que en su caso, pueda imponer a los denunciados, no puede sobrepasar los límites de la que en esta sentencia se deja sin efectos.

- Una vez que la autoridad responsable cumpla con lo ordenado, deberá **informar** a esta Sala Regional la determinación tomada, dentro de las **veinticuatro horas** siguientes a que ello ocurra.

(...)"

Lo anterior, a efecto de que esta autoridad emita una nueva resolución tomando en consideración lo resuelto en dicha ejecutoria; en los términos precisados por la sentencia de mérito.

4. Que al quedar intocadas las demás consideraciones que sustentan la Resolución identificada con el número INE/CG864/2018, este Consejo General únicamente se abocará al pronunciamiento de fondo relativo a la determinación del costo de los siguientes conceptos: a) **escenario y/o templete**, b) **equipo de audio**, y c) **producción y edición de video**, en los cuales se configuró un egreso no reportado por parte de los sujetos incoados, en el procedimiento de queja en materia de fiscalización identificado como INE/Q-COF-UTF/366/2018/JAL.

5. En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace al procedimiento administrativo sancionador, esta autoridad electoral procedió a retomar el análisis realizado por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues se argumentó que esta autoridad, en la Resolución impugnados, dejó de atender el valor razonable, sustentadas en información homogénea y comparable, que tomó en consideración para efecto de determinar el costo de los conceptos por: a) escenario y/o templete, b) equipo de audio, y c) producción y edición de video.

En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, realizando las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la sentencia:

Sentencia	considerando	Efectos	Acatamiento
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 2 , en relación al Apartado C se impone al Partido Encuentro Social una sanción consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$29,853.94 (veintinueve mil ochocientos cincuenta y tres pesos 94/100 M.N.).	Considerando 2, en relación al Apartado C	Emitir una nueva Resolución a efecto de que la Unidad Técnica de Fiscalización realice de nueva cuenta el procedimiento previsto en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización a fin de determinar de manera fundada y motivada, el costo de los bienes y servicios omitidos (templete, equipos de sonido y producción de los videos) de tal forma que se obtengan cotizaciones a valor razonable, sustentadas en información homogénea y comparable.	Se modifica la parte conducente la Resolución INE/CG864/2018, respecto Considerando 2, en relación al Apartado C.

Sentencia	considerando	Efectos	Acatamiento
<p>CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 2, en relación al Apartado C se impone al Partido del Trabajo una sanción consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$49,298.02 (cuarenta y nueve mil doscientos noventa y ocho pesos 02/100 M.N.).</p> <p>QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 2, en relación al Apartado C se impone al Partido Morena una sanción consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$49,298.02 (cuarenta y nueve mil doscientos noventa y ocho pesos 02/100 M.N.).</p> <p>SEXTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que durante la revisión al Informe de Campaña de los Ingresos y Gastos del otrora candidato al cargo de Presidente Municipal, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco, de la coalición "Juntos Haremos</p>			

Sentencia	considerando	Efectos	Acatamiento
Historia” se considere el monto de \$128,180.00 (ciento veintiocho mil ciento ochenta pesos 00/100 M.N.), para efectos del tope de gastos de campaña ; así como el seguimiento a los gastos registrados en el informe de campaña. De conformidad con lo expuesto en el Considerando 5 de la presente Resolución.			

6. En consecuencia, derivado del análisis realizado por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la Resolución identificados con la clave **INE/CG864/2018**, tocante a la necesidad de tomar en consideración los Lineamientos emitidos por la autoridad jurisdiccional correspondientes al **Considerando 2**, en relación al **Apartado C**, relativo a la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del Procedimiento Administrativo Sancionador de queja en materia de Fiscalización, instaurado en contra del C. Gabriel Vásquez Andrade, candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Ayotlán, Jalisco, por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/366/2018/JAL;¹ por lo que en cumplimiento de lo anterior, esta autoridad procede a dictar el presente Acuerdo.

7. Que la Sala Regional Guadalajara Superior, al haber dejado intocadas los demás considerandos que sustentan la Resolución **INE/CG864/2018**, este Consejo General únicamente se abocará a la modificación de la parte conducente del considerando **2**, en relación al **Apartado C**; específicamente a la **Determinación del monto involucrado**, así como la parte conducente de su respectivo Considerando **4** denominado **Imposición de la Sanción** y Considerando **5 correspondiente a la ccuantificación del monto para efectos de tope de gastos de campaña** tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos valer en el considerando precedente, en cumplimiento a lo determinado por la Sala

¹ Si bien el recurrente es el Partido Morena, la reindividualización de la sanción tendrá efectos para todos los partidos integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social), toda vez que de conformidad con el artículo 340 del Reglamento de Fiscalización, deberán ser sancionados de manera individual atendiendo el principio de proporcionalidad, el grado de responsabilidad de cada uno de dichos entes políticos y sus respectivas circunstancias y condiciones, tomando en consideración el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos en términos de la coalición.

Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ejecutoria materia del presente Acuerdo, en los términos siguientes:

Modificación de la Resolución INE/CG864/2018

“(…)

A N T E C E D E N T E S

(…)

XVIII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y otros.

- a) El cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/1257/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría), procediera a generar una nueva matriz de precios tomando en consideración los Lineamientos dictados en la sentencia que se acata.
- b) El siete de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de Auditoría dio respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior.

XIX. Solicitud de información al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos.

- a) El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/43424/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos respecto de la calidad en la elaboración del video, materia del presente asunto.
- b) El seis de septiembre de dos mil dieciocho, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos dio respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior.
- c) El seis de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/43543/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos respecto de la calidad en la elaboración del video, materia del presente asunto.

- d) El seis de septiembre de dos mil dieciocho, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos dio respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior.

(...)

Apartado C. Conceptos de gastos denunciados no reportados en el Sistema integral de Fiscalización.

(...)

Determinación del monto involucrado.

(...)

En razón de que nos encontramos frente a una conducta infractora de la normatividad electoral, consistente en la omisión de reportar 2 Template (escenario), 2 equipo de sonido y un servicio por producción y edición de audio y video.

No obstante, los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en pleno acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a realizar la determinación del costo por el uso del template, equipo de sonido, edición y producción de video para redes sociales.

Tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la ejecutoria, identificada con el número de expediente SG-RAP-227/2018, se procede a señalar lo siguiente:

Esta Unidad realizó un análisis de los conceptos que fueron omisos de reporte de gastos por concepto del template, equipo de sonido, edición y producción de video para redes sociales con el fin de determinar las condiciones de uso, el ámbito geográfico de cada uno de los servicios prestados, así como las características del bien o servicio prestado, tomando en cuenta el banco de proveedores con los que cuenta esta autoridad, registrados en el Registro Nacional de Proveedores.

En este sentido, en acatamiento al SG-RAP-227/2018, la autoridad electoral procedió a requerir a la Dirección de Auditoría a fin de realizar nuevamente la *valuación de los conceptos de **templete, equipo de sonido, edición y producción de video para redes sociales, en el estado de Jalisco,***

Al respecto mediante oficio INE/UTF/DA/3170/2018, la Dirección de Auditoría procedió a realizar la valuación de los costos solicitados considerando el valor más alto en cada uno de ellos, de conformidad con la matriz de precios utilizada en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Jalisco, obteniendo el valor como se detalla a continuación:

Determinación del Costo

“Arranque de campaña” (29 de abril de 2018)

Templete (10m de ancho por 6m de largo) evento

Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado en beneficio de su candidato, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF, como se describe a continuación:

- ❖ Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio para determinar un valor razonable, considerando, además, la información recabada durante el proceso de fiscalización, la presentada por los sujetos obligados en los registros contables presentados a través del Sistema Integral de Fiscalización, durante el Proceso Electoral Local 2017-2018 estado de Jalisco, y el Registro Nacional de Proveedores para elaborar una matriz de precios.
- ❖ En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran ser comparables con los gastos no reportados.
- ❖ Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o gastos no reportados por el sujeto obligado.

Entidad	Sujeto Obligado / Número de factura	Concepto solicitado S/DRN	Descripción	Cantidad	costo x metro2	Importe con IVA	Días de uso	Proceso electoral
Jalisco	Partido Revolucionario Institucional F A-2335	Templete	10m de ancho por 6m de largo	1 Templete 60m2	174	\$10,440.00 ²	1	Campaña 2017-2018
Jalisco	Partido Revolucionario Institucional F A-2044	Templete	10m de ancho por 6m de largo	1 Templete 60m2	104.4	\$6,264.00	1	Campaña 2017-2018

❖ En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos obligados, no contenía un registro similar, se procedió a recabar información reportada por los proveedores en el Registro Nacional de Proveedores.

❖ De la matriz de precios que se presentó en el Anexo Único del Dictamen correspondiente a la revisión de informes de ingresos y egresos de campaña de Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, en Jalisco se determinó que la factura presentada por el proveedor “Grupo Dahivon S.C.” GDA140219V72”, era la que más se ajustaba en términos de unidad de medida, ubicación, medias, tiempo de uso, temporalidad y demás características, por lo que, se tomó como base para la determinación del costo.

(Pesos)

Entidad	Sujeto Obligado Número de factura	Concepto solicitado S/DRN	Descripción	Cantidad	Días de uso	Proceso electoral	Importe con IVA
Jalisco	Partido Revolucionario Institucional F A-2335	Templete	10m de ancho por 6m de largo	1 templete	1	Campaña 2017-2018	\$10,440.00

Nota: Se adjunta el Anexo Único, la Matriz de Precios correspondiente al estado de Jalisco.

❖ Una vez obtenido el costo por los gastos no reportados, se procedió a determinar el valor de la forma siguiente:

(Pesos)

Candidato	Gasto no reportado	Unidades	Costo unitario por metro cuadrado	Importe total	Importe registrado	Importe del gasto no reportado
Gabriel Vásquez Andrade	Templete (60 mts2)	1	\$174	\$10,440.00	0	\$10,440.00

² Dicho monto es el resultado de multiplicar el costo del metro cuadrado por el total de metros cuadrados utilizados, es decir 60 m² por \$174.00 da un total de \$10,440.00.

Equipo de Sonido

Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado en beneficio de su candidato, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF, como se describe a continuación:

- ❖ Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio para determinar un valor razonable, considerando, además, la información recabada durante el proceso de fiscalización, la presentada por los sujetos obligados en los registros contables presentados a través del Sistema Integral de Fiscalización, durante el Proceso Electoral Local 2017-2018 estado de Jalisco, y el RNP para elaborar una matriz de precios.
- ❖ En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran ser comparables con los gastos no reportados.
- ❖ Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o gastos no reportados por el sujeto obligado.

Entidad	Sujeto Obligado / Número de factura	Concepto solicitado S/DRN	Descripción	Cantidad	costo x unidad	Importe con IVA	Días de uso	Proceso electoral
Jalisco	Movimiento Ciudadano F A-10626	Equipo de sonido	1 micrófono inalámbrico y 2 bocinas	1 paquete de 1 micrófono inalámbrico y 2 bocinas	870	\$870.00 ³	1	Campaña 2017-2018
Jalisco	Movimiento Ciudadano F A-1621	Equipo de sonido	1 micrófono inalámbrico y 2 bocinas	1 paquete de 1 micrófono inalámbrico y 2 bocinas	66.7	\$66.70	1	Campaña 2017-2018

- ❖ En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos obligados, no contenía un registro similar, se procedió a recabar información reportada por los proveedores en el Registro Nacional de Proveedores.
- ❖ De la matriz de precios que se presentó en el Anexo Único del Dictamen correspondiente a la revisión de informes de ingresos y egresos de campaña

³ Dicho monto es el resultado de multiplicar el costo del servicio por unidades utilizadas 1 micrófono inalámbrico y 2 bocinas, es decir 1 por \$870 da un total de \$870.00.

de Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, en Jalisco se determinó que la factura presentada por el proveedor “Mardaah Commercial Group S.A. de C.V.”, RFC: MCG130228TS4, era la que más se ajustaba en términos de unidad de medida, ubicación, medias, tiempo de uso, temporalidad y demás características, por lo que, se tomó como base para la determinación del costo.

(Pesos)

Entidad	Sujeto Obligado Número de factura	Concepto solicitado S/DRN	Descripción	Cantidad	Días de uso	Proceso electoral	Importe con IVA
Jalisco	Movimiento Ciudadano F A-10626	Equipo de sonido	1 micrófono inalámbrico y 2 bocinas	1 paquete de 1 micrófono inalámbrico y 2 bocinas	1	Campaña 2017-2018	\$870.00

Nota: Se adjunta el Anexo Único, la Matriz de Precios correspondiente al estado de Jalisco.

- ❖ Una vez obtenido el costo por los gastos no reportados, se procedió a determinar el valor de la forma siguiente:

(Pesos)

Candidato	Gasto no reportado	Unidades	Costo unitario	Importe total	Importe registrado	Importe del gasto no reportado
Gabriel Vásquez Andrade	Equipo de sonido	1	870	\$870.00	0	\$870.00

“Evento La Higuera” (22 de mayo de 2018)

Template (9m de ancho por 4m de largo)

Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado en beneficio de su candidato, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF, como se describe a continuación:

- ❖ Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio para determinar un valor razonable, considerando, además, la información recabada durante el proceso de fiscalización, la presentada por los sujetos obligados en los registros contables presentados a través del Sistema Integral de Fiscalización, durante el Proceso Electoral Local 2017-2018 estado de Jalisco, y el RNP para elaborar una matriz de precios.
- ❖ En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran ser comparables con los gastos no reportados.

- ❖ Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o gastos no reportados por el sujeto obligado.

Entidad	Sujeto Obligado / Número de factura	Concepto solicitado S/DRN	Descripción	Cantidad	costo x unidad	Importe con IVA	Días de uso	Proceso electoral
Jalisco	Partido Revolucionario Institucional F A-2335	Templete	9m de ancho por 4m de largo	1 Templete 36m2	174	\$6,264.00 ⁴	1	Campaña 2017-2018
Jalisco	Partido Revolucionario Institucional F A-2044	Templete	9m de ancho por 4m de largo	1 Templete 36m2	104.4	\$3,758.40	1	Campaña 2017-2018

- ❖ En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos obligados, no contenía un registro similar, se procedió a recabar información reportada por los proveedores en el Registro Nacional de Proveedores.
- ❖ De la matriz de precios que se presentó en el Anexo Único del Dictamen correspondiente a la revisión de informes de ingresos y egresos de campaña de Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, en Jalisco se determinó que la factura presentada por el proveedor “Grupo Dahivon S.C.”, RFC: GDA140219V72, era la que más se ajustaba en términos de unidad de medida, ubicación, medias, tiempo de uso, temporalidad y demás características, por lo que, se tomó como base para la determinación del costo.

Entidad	Sujeto Obligado Número de factura	Concepto solicitado S/DRN	Descripción	Cantidad	Días de uso	Proceso electoral	Importe con IVA
Jalisco	Partido Revolucionario Institucional F A-2335	Templete	9m de ancho por 4m de largo	1 templete	1	Campaña 2017-2018	\$6,264.00

Nota: Se adjunta el Anexo Único, la Matriz de Precios correspondiente al estado de Jalisco.

- ❖ Una vez obtenido el costo por los gastos no reportados, se procedió a determinar el valor de la forma siguiente:

(Pesos)

⁴ Dicho monto es el resultado de multiplicar el costo del metro cuadrado por el total de metros cuadrados utilizados, es decir 36 m² por \$174.00 da un total de \$6,264.00.

Candidato	Gasto no reportado	Unidades	Costo unitario	Importe total	Importe registrado	Importe del gasto no reportado
Gabriel Vásquez Andrade	Templete	1	174	\$6,264.00	0	\$6,264.00

Equipo de Sonido (4 bocinas con tripié)

Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado en beneficio de su candidato, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF, como se describe a continuación:

- ❖ Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio para determinar un valor razonable, considerando, además, la información recabada durante el proceso de fiscalización, la presentada por los sujetos obligados en los registros contables presentados a través del Sistema Integral de Fiscalización, durante el Proceso Electoral Local 2017-2018 estado de Jalisco, y el RNP para elaborar una matriz de precios.
- ❖ En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran ser comparables con los gastos no reportados.
- ❖ Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o gastos no reportados por el sujeto obligado.

Entidad	Sujeto Obligado / Número de factura	Concepto solicitado S/DRN	Descripción	Cantidad	costo x unidad	Importe con IVA	Días de uso	Proceso electoral
Jalisco	Movimiento Ciudadano F 2722	Equipo de sonido	4 bocinas con tripié	4 bocinas con tripié	1,392	\$5,568.00 ⁵	1	Campaña 2017-2018
Jalisco	Movimiento Ciudadano F 2614	Equipo de sonido	4 bocinas con tripié	4 bocinas con tripié	580	\$2,320.00	1	Campaña 2017-2018

- ❖ En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos obligados, no contenía un registro similar, se procedió a recabar información reportada por los proveedores en el Registro Nacional de Proveedores.

⁵ Dicho monto es el resultado de multiplicar el costo de cada bocina utilizada por el total de bocinas utilizadas, es decir 4 por \$1,392.00 da un total de \$5,568.00.

- ❖ De la matriz de precios que se presentó en el Anexo Único del Dictamen correspondiente a la revisión de informes de ingresos y egresos de campaña de Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, en Jalisco se determinó que la factura presentada por el proveedor “Miguel Laure Ruiz”, RFC: LARM640902FE2, era la que más se ajustaba en términos de unidad de medida, ubicación, medias, tiempo de uso, temporalidad y demás características, por lo que, se tomó como base para la determinación del costo.

(Pesos)

Entidad	Sujeto Obligado Número de factura	Concepto solicitado S/DRN	Descripción	Cantidad	Días de uso	Proceso electoral	Importe con IVA
Jalisco	Movimiento Ciudadano F 2722	Equipo de sonido	4 bocinas con tripié	4 bocinas con tripié	1	1,392	\$5,568.00

Nota: Se adjunta el Anexo Único, la Matriz de Precios correspondiente al estado de Jalisco.

- ❖ Una vez obtenido el costo por los gastos no reportados, se procedió a determinar el valor de la forma siguiente:

(Pesos)

Candidato	Gasto no reportado	Unidades	Costo unitario	Importe total	Importe registrado	Importe del gasto no reportado
Gabriel Vásquez Andrade	Equipo de sonido	4 bocinas con tripie	1,392	\$5,568.00	0	\$5,568.00

Edición y producción de video para difusión en redes sociales.

Al respecto, es de mencionarse que para la determinación del monto involucrado en el presente asunto, se tomará en cuenta el valor de las facturas presentadas en los registros contables presentados a través del Sistema Integral de Fiscalización por los sujetos obligados en Jalisco, correspondientes a spot publicitario para redes sociales, los cuales contienen similares elementos a los videos que se detectaron en el Procedimiento Administrativo Sancionador que ahora se acata, tomando en cuenta elementos que permiten arribar a esta autoridad, que dichos videos denunciados representan un gasto similar a los analizados por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (en adelante DEPPP).

Lo anterior, en razón de que mediante oficio INE/DEPPP/DE/DATE/5924/2018 la DEPPP, atendió la solicitud realizada por la Unidad Técnica de Fiscalización respecto de la calidad de cinco (5) videos localizados por la Dirección de

Auditoría a fin de analizar que las características de dichos videos, con similares características, señalando lo siguiente:

“Se informa que para el análisis del material enviado se determinaron las siguientes características:

- **Calidad de video para transmisión Broadcast:** Manejo de resolución, códecs tasa de bit rate y tipo de compresión para poder ser radiodifundidos.
- **Producción:** probable uso alguno de los siguientes equipos: semi-profesionales o profesionales de producción como son: Cámaras de foto o video semi-profesionales a profesionales, Iluminación, microfónica semi-profesional a profesional, grúas, dolly cam, steady cam, dron, entre otros.
- **Manejo de imagen:** calidad de imagen, encuadres, movimiento de cámaras, definición, uso de imágenes de stock, locaciones.
- **Audio:** Calidad de grabación, locutores, jingles, mezcla de audios.
- **Gráficos:** Diseño, animaciones, calidad de los mismos.
- **Post-producción:** Edición, efectos, mezcla de efectos y animaciones con imágenes probable uso de equipo de edición de audio y video semi-profesional a profesional.
- **Creatividad:** Uso de guion y contenidos.

Video 1: Duración: 01:48 min.	
Calidad de video para transmisión Broadcast	No
Producción	Sí
Imagen	Sí
Audio	Sí
Gráficos	Sí
Post-producción	Sí
Creatividad	Sí

Video 2: Duración: 01:59 min.	
Calidad de video para transmisión Broadcast	No
Producción	Sí
Imagen	Sí
Audio	Sí
Gráficos	No
Post-producción	Sí
Creatividad	Sí

Video 3: Duración: 54 seg.	
Calidad de video para transmisión Broadcast	No
Producción	Sí
Imagen	Sí
Audio	Sí
Gráficos	Sí
Post-producción	Sí
Creatividad	Sí

Video 4: Duración: 54 seg.	
Calidad de video para transmisión Broadcast	No
Producción	Sí
Imagen	Sí
Audio	Sí
Gráficos	Sí
Post-producción	Sí
Creatividad	Sí

Video 5: Duración: 44 seg.	
Calidad de video para transmisión Broadcast	No
Producción	Sí
Imagen	Sí
Audio	Sí
Gráficos	Sí
Post-producción	Sí
Creatividad	Sí

(...)”

Cabe señalar que la metodología de la determinación del costo de mérito tiene su base en el marco de la revisión de los informes de campaña en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco, lo cual se cumple con el elemento ámbito geográfico y de temporalidad.

A continuación, se detalla dicho procedimiento:

Matriz de precios video: “Convocatoria mega caravana” con duración de 00:41 segundos

Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado en beneficio de su candidato, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF, como se describe a continuación:

- ❖ Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio para determinar un valor razonable, considerando, además, la

información recabada durante el proceso de fiscalización, la presentada por los sujetos obligados en los registros contables presentados a través del Sistema Integral de Fiscalización, durante el Proceso Electoral Local 2017-2018 estado de Jalisco, y el RNP para elaborar una matriz de precios.

- ❖ En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran ser comparables con los gastos no reportados.
- ❖ Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o gastos no reportados por el sujeto obligado.

Entidad	Sujeto Obligado / Número de factura	Concepto solicitado S/DRN	Descripción	Cantidad	costo x segundo	Importe con IVA	Días de uso	Proceso electoral
Jalisco	Movimiento Ciudadano F B208	Edición y producción de video para difusión en redes sociales	Video 1 Convocatorio mega caravana Duración 0041 seg	1 video 41 segundos	42.96	\$1,761.36 ⁶	N/A	Campaña 2017-2018
Jalisco	Partido Acción Nacional F 768	Edición y producción de video para difusión en redes sociales	Video 1 Convocatorio mega caravana Duración 0041 seg	1 video 41 segundos	8.33	\$341.66	N/A	Campaña 2017-2018

- ❖ En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos obligados, no contenía un registro similar, se procedió a recabar información reportada por los proveedores en el Registro Nacional de Proveedores.
- ❖ De la matriz de precios que se presentó en el Anexo Único del Dictamen correspondiente a la revisión de informes de ingresos y egresos de campaña de Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, en Jalisco se determinó que la factura presentada por el proveedor “La Covacha Gabinete de Comunicación S.A. de C.V.”, RFC:CGC110225LU6, era la que más se ajustaba en términos de unidad de medida, ubicación, medias, tiempo de uso, temporalidad y demás características, por lo que, se tomó como base para la determinación del costo.

(Pesos)

⁶ Dicho monto es el resultado de multiplicar el costo por segundo por el total de segundos utilizados, es decir 41 segundos por \$42.00 da un total de \$1,761.36.

Entidad	Sujeto Obligado Número de factura	Concepto solicitado S/DRN	Descripción	Cantidad	Días de uso	Proceso electoral	Importe con IVA
Jalisco	Movimiento Ciudadano F B208	Edición y producción de video para difusión en redes sociales	Video 1 Convocatorio mega caravana Duración 0041 seg	1 video	1	Campaña 2017-2018	\$1,761.36

Nota: Se adjunta el Anexo Único, la Matriz de Precios correspondiente al estado de Jalisco.

- ❖ Una vez obtenido el costo por los gastos no reportados, se procedió a determinar el valor de la forma siguiente:

(Pesos)						
Candidato	Gasto no reportado	Unidades	Costo x segundo	Importe total	Importe registrado	Importe del gasto no reportado
Gabriel Vásquez Andrade	Video 1 Convocatorio mega caravana Duración 0041 seg	1 video	42.96	\$1,761.36	0	\$1,761.36

Edición y producción de video para difusión en redes sociales.

Matriz de precios video: “Éxito de la caravana”, con duración 03:25 seg

Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado en beneficio de su candidato, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF, como se describe a continuación:

- ❖ Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio para determinar un valor razonable, considerando, además, la información recabada durante el proceso de fiscalización, la presentada por los sujetos obligados en los registros contables presentados a través del Sistema Integral de Fiscalización, durante el Proceso Electoral Local 2017-2018 estado de Jalisco, y el RNP para elaborar una matriz de precios.
- ❖ En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran ser comparables con los gastos no reportados.
- ❖ Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o gastos no reportados por el sujeto obligado.

Entidad	Sujeto Obligado / Número de factura	Concepto solicitado S/DRN	Descripción	Cantidad	costo x segundo	Importe con IVA	Días de uso	Proceso electoral
Jalisco	Movimiento Ciudadano F B208	Edición y producción de video para difusión en redes sociales	Video 2 Éxito de la caravana Duración 03:25 seg	1 video 205 segundos	42.96	\$8,806.80 ⁷	N/A	Campaña 2017-2018
Jalisco	Partido Acción Nacional F 768	Edición y producción de video para difusión en redes sociales	Video 2 Éxito de la caravana Duración 03:25 seg	1 video 205 segundos	8.33	\$1,708.26	N/A	Campaña 2017-2018

- ❖ En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos obligados, no contenía un registro similar, se procedió a recabar información reportada por los proveedores en el Registro Nacional de Proveedores.
- ❖ De la matriz de precios que se presentó en el Anexo Único del Dictamen correspondiente a la revisión de informes de ingresos y egresos de campaña de Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, en Jalisco se determinó que la factura presentada por el proveedor “La Covacha Gabinete de Comunicación S.A. de C.V.”, RFC:CGC110225LU6, era la que más se ajustaba en términos de unidad de medida, ubicación, medias, tiempo de uso, temporalidad y demás características, por lo que, se tomó como base para la determinación del costo.

(Pesos)

Entidad	Sujeto Obligado Número de factura	Concepto solicitado S/DRN	Descripción	Cantidad	Días de uso	Proceso electoral	Importe con IVA
Jalisco	Movimiento Ciudadano F B208	Edición y producción de video para difusión en redes sociales	Video 2 Éxito de la caravana Duración 03:25 seg	1 video	N/A	Campaña 2017-2018	\$8,806.80

Nota: Se adjunta el Anexo Único, la Matriz de Precios correspondiente al estado de Jalisco.

- ❖ Una vez obtenido el costo por los gastos no reportados, se procedió a determinar el valor de la forma siguiente:

(Pesos)

⁷ Dicho monto es el resultado de multiplicar el costo por segundo por el total de segundos utilizados, es decir un video de 3:25 segundos por \$42.96 da un total de \$8,806.80.

Candidato	Gasto no reportado	Unidades	Costo x segundo	Importe total	Importe registrado	Importe del gasto no reportado
Gabriel Vásquez Andrade	Edición y producción de video para difusión en redes sociales	1 Video	42.96	\$8,806.80	0	\$8,806.80

Edición y producción de video para difusión en redes sociales.

Matriz de precios video: “Gabriel Vásquez, es Garantía de Proceso Juntos Haremos” con duración 2:23 min

Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado en beneficio de su candidato, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF, como se describe a continuación:

- ❖ Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio para determinar un valor razonable, considerando, además, la información recabada durante el proceso de fiscalización, la presentada por los sujetos obligados en los registros contables presentados a través del Sistema Integral de Fiscalización, durante el Proceso Electoral Local 2017-2018 estado de Jalisco, y el RNP para elaborar una matriz de precios.
- ❖ En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran ser comparables con los gastos no reportados.
- ❖ Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o gastos no reportados por el sujeto obligado.

Entidad	Sujeto Obligado / Número de factura	Concepto solicitado S/DRN	Descripción	Cantidad	costo x segundo	Importe con IVA	Días de uso	Proceso electoral
Jalisco	Movimiento Ciudadano F B208	Edición y producción de video para difusión en redes sociales	Video 3 Gabriel Vásquez, es Garantía de Proceso Juntos Haremos	1 video 143 segundos	42.96	\$6,143.28 ⁸	N/A	Campaña 2017-2018

⁸ Dicho monto es el resultado de multiplicar el costo por segundo por el total de segundos utilizados, es decir un video de 2:23 segundos por \$42.96 da un total de \$6,143.28.

Entidad	Sujeto Obligado / Número de factura	Concepto solicitado S/DRN	Descripción	Cantidad	costo x segundo	Importe con IVA	Días de uso	Proceso electoral
			Duración 2:23 min					
Jalisco	Partido Acción Nacional F 768	Edición y producción de video para difusión en redes sociales	Video 3 Gabriel Vásquez, es Garantía de Proceso Juntos Haremos Duración 2:23 min	1 video 143 segundos	8.33	\$1,191.19	N/A	Campaña 2017-2018

- ❖ En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos obligados, no contenía un registro similar, se procedió a recabar información reportada por los proveedores en el Registro Nacional de Proveedores.
- ❖ De la matriz de precios que se presentó en el Anexo Único del Dictamen correspondiente a la revisión de informes de ingresos y egresos de campaña de Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, en Jalisco se determinó que la factura presentada por el proveedor “La Covacha Gabinete de Comunicación S.A. de C.V.”, RFC:CGC110225LU6”, era la que más se ajustaba en términos de unidad de medida, ubicación, medias, tiempo de uso, temporalidad y demás características, por lo que, se tomó como base para la determinación del costo.

Entidad	Sujeto Obligado Número de factura	Concepto solicitado S/DRN	Descripción	Cantidad	Días de uso	Proceso electoral	Importe con IVA
Jalisco	Movimiento Ciudadano F B208	Edición y producción de video para difusión en redes sociales	Video 3 Gabriel Vásquez, es Garantía de Proceso Juntos Haremos Duración 2:23 min	1 video	1	Campaña 2017-2018	\$6,143.28

Nota: Se adjunta el Anexo Único, la Matriz de Precios correspondiente al estado de Jalisco.

- ❖ Una vez obtenido el costo por los gastos no reportados, se procedió a determinar el valor de la forma siguiente:

(Pesos)						
Candidato	Gasto no reportado	Unidades	Costo x segundo	Importe total	Importe registrado	Importe del gasto no reportado
Gabriel Vásquez Andrade	Edición y producción de video para difusión en redes sociales	1 video	42.96	\$6,143.28	0	\$6,143.28

En este sentido, el partido incoado omitió reportar gastos por concepto de **2 templete, 2 equipos de sonido, edición y producción de 3 video para redes sociales**, del entonces candidato a Presidente Municipal en Ayotlan, Jalisco el C. Gabriel Vásquez Andrade, gastos que ascienden al importe de **\$39,853.44 (treinta y nueve mil, ochocientos cincuenta y tres pesos 44/100 M.N.)**, como se detalla a continuación:

Entidad	Sujeto Obligado Número de factura	Concepto solicitado S/DRN	Descripción	Cantidad	Días de uso	Proceso electoral	Importe con IVA
Jalisco	Partido Revolucionario Institucional F A-2335	Templete	10m de ancho por 6m de largo	1 templete	1	Campaña 2017-2018	\$10,440.00
Jalisco	Movimiento Ciudadano F A-10626	Equipo de sonido	1 micrófono inalámbrico y 2 bocinas	1 micrófono inalámbrico y 2 bocinas	1	Campaña 2017-2018	\$870.00
Jalisco	Partido Revolucionario Institucional F A-2335	Templete	9m de ancho por 4m de largo	1 templete	1	Campaña 2017-2018	\$6,264.00
Jalisco	Movimiento Ciudadano F 2722	Equipo de sonido	4 bocinas con tripié	4 bocinas con tripié	1	Campaña 2017-2018	\$5,568.00
Jalisco	Movimiento Ciudadano F B208	Edición y producción de video para difusión en redes sociales	Video 1 Convocatorio mega caravana Duración 00:41 seg	3 videos	N/A	Campaña 2017-2018	\$1,761.36
			Video 2 Éxito de la caravana Duración 03:25 seg		N/A	Campaña 2017-2018	\$8,806.80
			Video 3 Gabriel Vásquez, es Garantía de Proceso Juntos Haremos Duración 2:23 min		N/A	Campaña 2017-2018	\$6,143.28
Total							\$39,853.44

(...)

4. Imposición de la Sanción

Que una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita, de conformidad en los artículos 79, numeral 1, inciso b) fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que ya han sido analizados en la parte conducente de esta Resolución, se procede a individualizar la sanción correspondiente, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por cuanto hace a la omisión de **reportar gastos por concepto de 2 Templete, 2 equipos de sonido y el servicio por producción y edición de 3 videos** en los

informes del C. Gabriel Vásquez Andrade, entonces candidato a Presidente Municipal de Ayotlán, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Jalisco.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS”, capítulo III “*DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS*” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria – Trimestral, Anual-, de Precampaña y Campaña.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes que se refiere en el inciso anterior.”*

De lo anterior se desprende que, no obstante que los sujetos obligados hayan incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda interna.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o coaliciones, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y egresos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.

Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización,

impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y es en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para

desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen

la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.-

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.”

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de

responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta de los sujetos obligados no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir a la coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditaron ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, a los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, pues no presentaron acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales son originalmente responsables.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por cuanto hace al no reporte de gastos, consistente en **2 Templatetes, 2 equipos de sonido y producción y edición de 3 videos**, las cuales beneficiaron al C. Gabriel Vásquez Andrade, candidato a Presidente Municipal en Ayotlán por la coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, en el Marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio

sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión)
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades de los sujetos obligados de tal manera que comprometan el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

Con relación con la irregularidad identificada en el presente procedimiento, se identificó que los sujetos obligados omitieron reportar el gasto por concepto de en **2 Templatees, 2 equipos de sonido y producción y edición de 3 videos.**

En relación con la irregularidad identificada en el apartado anterior, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar sus egresos realizados durante la campaña del Gabriel Vásquez Andrade, candidato a Presidente Municipal en Ayotlán, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Jalisco, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

Modo: El sujeto obligado omitió reportar en el Informe de Campaña el egreso relativo a en 2 Template, 2 equipos de sonido y producción y edición de 3 videos **cuyo valor fue determinado con base en la matriz de precios conforme a la cual el monto involucrado total es de \$39,853.44 (treinta y nueve mil, ochocientos cincuenta y tres pesos 44/100 M.N.).** De ahí que este contravino lo dispuesto por los 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.

Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió de la revisión del Informe de Campaña de los Ingresos y Egresos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Jalisco.

Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Jalisco.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica de los sujetos obligados de cometer la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, y no únicamente su puesta en peligro.

En este caso, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, con lo que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia en la rendición de cuentas como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, sujeto obligado vulneró los valores establecidos y afecta a persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos.

En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que en el campo de la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia electoral.

Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.

Ahora bien el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente⁹:

- a)** Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio.
- b)** Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
- c)** Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
- d)** Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación y sus componentes deberán ser comparables.
- e)** Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante

9 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016

relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y comparable.

Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, valorará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.

Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.

En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación comprobatoria.

En este orden de ideas en la conducta analizada, el sujeto obligado vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización¹⁰

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los

¹⁰ Artículo 79. 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes: b) Informes de Campaña: I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente y artículo 127, 1 Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales; 2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad

gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser una infracción de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las conductas señaladas, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por los sujetos infractores, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables a los sujetos obligados se traducen en una **falta** de resultado que ocasiona un daño directo y real de los bienes jurídicos tutelados arriba señalados.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que las infracciones en cuestión afectan de manera directa y real los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una misma conducta y, por tanto, en una misma falta de carácter **SUSTANTIVO** o de **FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que los sujetos obligados no son reincidentes respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecue a las particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

En esta tesitura, debe considerarse que la coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, no cuentan con financiamiento público estatal para actividades ordinarias, toda vez que obtuvo su

registro con fecha posterior a la última elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

En este orden de ideas, y de acuerdo al criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es idóneo que esta autoridad considere, para efecto de la imposición de las sanciones que pudieran determinarse, la capacidad económica de los partidos políticos derivada del financiamiento público federal para actividades ordinarias.¹¹

En razón de lo anterior, el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG339/2017, mediante el cual aprobó las cifras de financiamiento público de los Partidos Políticos Nacionales y gastos de campaña del conjunto de candidaturas independientes para el ejercicio dos mil dieciocho, determinando asignarles a los sujetos obligados que nos ocupan los montos siguientes:

Partido Político	Monto de financiamiento público para Actividades Ordinarias 2018
Partido del Trabajo	\$ 236,844,348
Encuentro Social	\$ 250,958,840
Morena	\$414,914,437

En este tenor, es oportuno mencionar que los citados institutos políticos están legal y fácticamente posibilitados para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho que para valorar la capacidad económica de los sujetos infractores es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de la comisión de las infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

¹¹ Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con financiamiento público local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin recursos económicos para llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente.

En este sentido, los partidos políticos cuentan con saldos pendientes por pagar (con corte al mes de **septiembre de 2018**, relativos a sanciones impuestas en diversos procedimientos administrativos sancionadores, conforme a lo que a continuación se indica:

PARTIDO DEL TRABAJO				
Deducción	Ámbito	Importe total	Importe mensual a deducir	Saldo
INE/CG771/2015-CUARTO-c)-52	FEDERAL	\$2,754,623.04	\$0.56	\$0.00
CG190/2013-CUARTO-g)-41-II	FEDERAL	\$2,655,527.37	\$96,710.62	\$2,558,816.75
CG190/2013-CUARTO-m)-102-II	FEDERAL	\$1,841,595.23	\$67,105.90	\$1,774,489.33
CG190/2013-CUARTO-ñ)-109-II	FEDERAL	\$447,529.40	\$447,529.40	\$0.00
CG190/2013-CUARTO-p)-113-II	FEDERAL	\$1,228,768.90	\$43,421.46	\$1,185,347.44
CG190/2013-CUARTO-y)-185-II	FEDERAL	\$222,019.46	\$222,019.46	\$0.00
CG190/2013-CUARTO-y)-272-II	FEDERAL	\$732,536.01	\$25,658.14	\$706,877.87
CG190/2013-CUARTO-aa)-266-II	FEDERAL	\$1,510,565.84	\$55,263.68	\$1,455,302.16
CG190/2013-CUARTO-ac)-218-V	FEDERAL	\$1,058,565.95	\$37,500.36	\$1,021,065.59
CG190/2013-CUARTO-af)-300-II	FEDERAL	\$972,617.65	\$35,526.65	\$937,091.00
CG190/2013-CUARTO-ag)-343-II	FEDERAL	\$510,108.72	\$510,108.72	\$0.00
CG190/2013-CUARTO-ag)-375-II	FEDERAL	\$1,548,480.15	\$55,263.68	\$1,493,216.47
CG190/2013-CUARTO-ai)-294-II	FEDERAL	\$710,431.88	\$25,658.14	\$684,773.74
CG190/2013-CUARTO-aj)-398-II	FEDERAL	\$528,371.41	\$528,371.41	\$0.00
CG190/2013-CUARTO-ak)-350-II	FEDERAL	\$538,468.87	\$538,468.87	\$0.00
INE/CG522/2017-PRIMERO-c)-12	FEDERAL	\$37,537,538.96	\$6,321,805.71	\$17,492,133.04
INE/CG260/2018-CUARTO-a)-4 faltas formales	FEDERAL	\$3,019.60	\$3,019.60	\$0.00
INE/CG260/2018-CUARTO-b)-8	FEDERAL	\$754.90	\$754.90	\$0.00
INE/CG260/2018-CUARTO-c)-5	FEDERAL	\$67,941.00	\$67,941.00	\$0.00
INE/CG260/2018-CUARTO-c)-9	FEDERAL	\$101,081.11	\$101,081.11	\$0.00
INE/CG260/2018-CUARTO-d)-10	FEDERAL	\$93,230.15	\$93,230.15	\$0.00
SRE-PSC-196/2018-SEGUNDO	FEDERAL	\$161,200.00	\$161,200.00	\$0.00
SRE-PSC-205/2018-SEGUNDO	FEDERAL	\$201,500.00	\$201,500.00	\$0.00
SRE-PSC-210/2018-SEGUNDO	FEDERAL	\$201,500.00	\$201,500.00	\$0.00
CG/22-NOV-2011 PARTIDO DEL TRABAJO-TERCERO	LOCAL / YUCATAN	\$170,100.00	\$7,087.50	\$99,225.00
CG/22-NOV-2011 PARTIDO DEL TRABAJO-CUARTO	LOCAL / YUCATAN	\$28,350.00	\$1,181.25	\$16,537.50
CG/22-NOV-2011 PARTIDO DEL TRABAJO-QUINTO	LOCAL / YUCATAN	\$168,035.45	\$7,001.47	\$98,020.75
CG/22-NOV-2011 PARTIDO DEL TRABAJO-SEXTO	LOCAL / YUCATAN	\$211,385.53	\$8,807.73	\$123,308.23
CG/22-NOV-2011 PARTIDO DEL TRABAJO-SEPTIMO	LOCAL / YUCATAN	\$59,945.92	\$2,497.74	\$34,968.52
CG/22-NOV-2011 PARTIDO DEL TRABAJO-NOVENO	LOCAL / YUCATAN	\$31,205.00	\$1,298.79	\$18,210.86
Total:		\$56,296,997.50	\$9,868,514.00	\$29,699,384.25

MORENA				
Deducción	Ámbito	Importe total	Importe mensual a deducir	Saldo
INE/CG262/2018-CUARTO-a)-3	LOCAL / JALISCO	\$754.90	\$754.90	\$0.00
INE/CG262/2018-CUARTO-b)-1	LOCAL / JALISCO	\$9,813.70	\$9,813.70	\$0.00
INE/CG262/2018-CUARTO-c)-2	LOCAL / JALISCO	\$373,675.50	\$373,675.50	\$0.00
INE/CG262/2018-CUARTO-c)-5	LOCAL / JALISCO	\$52,843.00	\$52,843.00	\$0.00
INE/CG262/2018-CUARTO-d)-4	LOCAL / JALISCO	\$50,804.77	\$50,804.77	\$0.00
INE/CG262/2018-CUARTO-e)-6	LOCAL / JALISCO	\$536,507.43	\$536,507.43	\$0.00
INE/CG529/2018-SEGUNDO	FEDERAL	\$41,575.89	\$41,575.89	\$0.00
INE/CG532/2018-SEGUNDO-Ciudadano 1	FEDERAL	\$41,575.92	\$41,575.92	\$0.00
INE/CG532/2018-SEGUNDO-Ciudadano 2	FEDERAL	\$41,575.92	\$41,575.92	\$0.00
INE/CG532/2018-SEGUNDO-Ciudadano 3	FEDERAL	\$41,575.92	\$41,575.92	\$0.00
INE/CG532/2018-SEGUNDO-Ciudadano 4	FEDERAL	\$41,575.92	\$41,575.92	\$0.00
INE/CG532/2018-SEGUNDO-Ciudadano 5	FEDERAL	\$41,575.92	\$41,575.92	\$0.00
INE/CG532/2018-SEGUNDO-Ciudadano 6	FEDERAL	\$41,575.92	\$41,575.92	\$0.00
INE/CG532/2018-SEGUNDO-Ciudadano 7	FEDERAL	\$41,575.92	\$41,575.92	\$0.00
SRE-PSD-80/2018-SEGUNDO	FEDERAL	\$8,060.00	\$0.88	\$0.00
SRE-PSC-173/2018-SEGUNDO	FEDERAL	\$161,200.00	\$161,199.49	\$0.51
Total:		\$1,526,266.63	\$1,518,207.00	\$0.51

ENCUENTRO SOCIAL				
Deducción	Ámbito	Importe total	Importe mensual	Saldo
INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-b)-52	LOCAL / COAHUILA	\$924.36	\$924.36	\$0.00
INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-b)-53	LOCAL / COAHUILA	\$8,638.94	\$8,638.94	\$0.00
INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-b)-54	LOCAL / COAHUILA	\$23,565.38	\$23,565.38	\$0.00
INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-b)-78	LOCAL / COAHUILA	\$3,232.27	\$3,232.27	\$0.00
INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-c)-74	LOCAL / COAHUILA	\$334.40	\$334.40	\$0.00
INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-e)-22	LOCAL / COAHUILA	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-e)-56	LOCAL / COAHUILA	\$4,789.81	\$4,789.81	\$0.00
INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-e)-57	LOCAL / COAHUILA	\$355.22	\$355.22	\$0.00
INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-e)-58	LOCAL / COAHUILA	\$522.73	\$522.73	\$0.00
INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-e)-60	LOCAL / COAHUILA	\$25,414.79	\$25,414.79	\$0.00
INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-e)-82	LOCAL / COAHUILA	\$5,824.50	\$5,824.50	\$0.00
INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-e)-83	LOCAL / COAHUILA	\$129.94	\$129.94	\$0.00
INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-e)-84	LOCAL / COAHUILA	\$778.91	\$778.91	\$0.00
INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-e)-86	LOCAL / COAHUILA	\$31,266.68	\$31,266.68	\$0.00
INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-f)-59	LOCAL / COAHUILA	\$2,249.26	\$2,249.26	\$0.00
INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-f)-85	LOCAL / COAHUILA	\$7,483.89	\$7,483.89	\$0.00
INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-g)-32	LOCAL / COAHUILA	\$301.96	\$301.96	\$0.00
INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-g)-36	LOCAL / COAHUILA	\$301.96	\$301.96	\$0.00

ENCUENTRO SOCIAL				
Deducción	Ámbito	Importe total	Importe mensual	Saldo
INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-g)-66	LOCAL / COAHUILA	\$905.88	\$905.88	\$0.00
INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-h)-33	LOCAL / COAHUILA	\$3,381.95	\$3,381.95	\$0.00
INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-h)-37	LOCAL / COAHUILA	\$1,796.66	\$1,796.66	\$0.00
INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-h)-67	LOCAL / COAHUILA	\$6,250.57	\$6,250.57	\$0.00
INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-h)-70	LOCAL / COAHUILA	\$5,148.42	\$5,148.42	\$0.00
INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-i)-34	LOCAL / COAHUILA	\$19,476.42	\$19,476.42	\$0.00
INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-i)-35	LOCAL / COAHUILA	\$2,415.68	\$2,415.68	\$0.00
INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-i)-38	LOCAL / COAHUILA	\$13,286.24	\$13,286.24	\$0.00
INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-i)-68	LOCAL / COAHUILA	\$30,346.98	\$30,346.98	\$0.00
INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-i)-69	LOCAL / COAHUILA	\$2,189.21	\$2,189.21	\$0.00
INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-i)-71	LOCAL / COAHUILA	\$68,922.37	\$68,922.37	\$0.00
INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-j)-28bis	LOCAL / COAHUILA	\$17,565.17	\$17,565.17	\$0.00
INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-j)-63	LOCAL / COAHUILA	\$2,722.82	\$2,722.82	\$0.00
INE/CG313/2017-DECIMO SEGUNDO-j)-89 bis	LOCAL / COAHUILA	\$2,734.03	\$2,732.40	\$1.63
INE/CG447/2017-DECIMO	LOCAL / COAHUILA	\$88,338.37	\$88,338.37	\$0.00
INE/CG447/2017-DECIMO SEPTIMO	LOCAL / COAHUILA	\$16,236.65	\$16,236.65	\$0.00
INE/CG532/2017-SEPTIMO-a)-6 faltas	LOCAL / COAHUILA	\$4,076.46	\$4,076.46	\$0.00
INE/CG532/2017-SEPTIMO-b)-10	LOCAL / COAHUILA	\$1,540.02	\$1,540.02	\$0.00
INE/CG532/2017-SEPTIMO-c)-12	LOCAL / COAHUILA	\$15,448.28	\$15,448.28	\$0.00
INE/CG532/2017-SEPTIMO-d)-8	LOCAL / COAHUILA	\$85,313.84	\$85,313.84	\$0.00
INE/CG532/2017-SEPTIMO-f)-15	LOCAL / COAHUILA	\$298,407.24	\$298,407.24	\$0.00
INE/CG822/2016-DECIMO SEPTIMO-b)-12	LOCAL / NAYARIT	\$1,436.90	\$0.57	\$0.00
INE/CG300/2017-SEXTO-a)-12 faltas formales	LOCAL / NAYARIT	\$9,058.80	\$9,058.80	\$0.00
INE/CG300/2017-SEXTO-b)-2	LOCAL / NAYARIT	\$101,911.50	\$101,911.50	\$0.00
INE/CG300/2017-SEXTO-b)-14	LOCAL / NAYARIT	\$252,891.50	\$252,891.50	\$0.00
INE/CG300/2017-SEXTO-b)-23	LOCAL / NAYARIT	\$513,332.00	\$513,332.00	\$0.00
INE/CG300/2017-SEXTO-b)-32	LOCAL / NAYARIT	\$7,549.00	\$7,549.00	\$0.00
INE/CG300/2017-SEXTO-b)-34	LOCAL / NAYARIT	\$1,513,574.50	\$1,513,574.50	\$0.00
INE/CG300/2017-SEXTO-c)-7	LOCAL / NAYARIT	\$153,765.27	\$153,765.27	\$0.00
INE/CG300/2017-SEXTO-d)-9	LOCAL / NAYARIT	\$53,277.33	\$53,277.33	\$0.00
INE/CG300/2017-SEXTO-d)-10	LOCAL / NAYARIT	\$9,952.72	\$9,952.72	\$0.00
INE/CG300/2017-SEXTO-d)-11	LOCAL / NAYARIT	\$5,820.38	\$5,820.38	\$0.00
INE/CG300/2017-SEXTO-d)-19	LOCAL / NAYARIT	\$15,343.58	\$15,343.58	\$0.00
INE/CG300/2017-SEXTO-d)-29	LOCAL / NAYARIT	\$11,689.88	\$11,689.88	\$0.00
INE/CG300/2017-SEXTO-d)-38	LOCAL / NAYARIT	\$51,559.03	\$51,559.03	\$0.00
INE/CG300/2017-SEXTO-d)-48	LOCAL / NAYARIT	\$205,369.50	\$205,369.50	\$0.00
INE/CG300/2017-SEXTO-e)-13	LOCAL / NAYARIT	\$2,264.70	\$2,264.70	\$0.00
INE/CG300/2017-SEXTO-e)-22	LOCAL / NAYARIT	\$8,303.90	\$8,303.90	\$0.00
INE/CG300/2017-SEXTO-e)-33	LOCAL / NAYARIT	\$5,284.30	\$5,284.30	\$0.00

ENCUENTRO SOCIAL				
Deducción	Ámbito	Importe total	Importe mensual	Saldo
INE/CG300/2017-SEXTO-f)-18	LOCAL / NAYARIT	\$7,013.92	\$7,013.92	\$0.00
INE/CG300/2017-SEXTO-f)-37	LOCAL / NAYARIT	\$1,096.27	\$1,096.27	\$0.00
INE/CG300/2017-SEXTO-g)-21	LOCAL / NAYARIT	\$273.81	\$273.81	\$0.00
INE/CG300/2017-SEXTO-h)-31	LOCAL / NAYARIT	\$726.37	\$726.37	\$0.00
INE/CG300/2017-SEXTO-i)-39	LOCAL / NAYARIT	\$9,684.84	\$9,684.84	\$0.00
INE/CG543/2018-SEXTO-k)-49	LOCAL / NAYARIT	\$17,110.00	\$17,110.00	\$0.00
Total:		\$3,766,408.26	\$3,764,970.30	\$1.63

En razón de lo anterior, es posible señalar que los Partido Morena, del Trabajo y Encuentro Social, cuentan con saldos pendientes por pagar; sin embargo, la sanción que se le impondrá no implica un detrimento a su capacidad económica.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica de los infractores y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:

“I. Con amonestación pública;

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;

III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;

IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y

V En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.”

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción.

No sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por los sujetos obligados, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de **Template, equipo de sonido y el servicio por producción y edición de video**.
- Que con la actualización de una falta sustantiva, toda vez que el sujeto obligado impidió a la autoridad fiscalizadora tener certeza sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos erogados al no reportarlos dentro de su informe respectivo.

- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible a los sujetos obligados consistió en omitir reportar el gasto de **Template, equipo de sonido y el servicio por producción y edición de video**, por un monto de **\$39,853.44 (treinta y nueve mil, ochocientos cincuenta y tres pesos 44/100 M.N.)**, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que los sujetos obligados conocían los alcances de las disposiciones legales invocadas.
- Que los sujetos obligados no son reincidentes.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$39,853.44 (treinta y nueve mil, ochocientos cincuenta y tres pesos 44/100 M.N.)**.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por los sujetos obligados

Bajo esta tesitura se considera que la sanción a imponer a la Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos **Morena, del Trabajo y Encuentro Social**, es la prevista en la fracción III, numeral 1, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, relativa a un monto igual al ejercido en exceso, considerando los elementos objetivos y subjetivos señalados en párrafos precedentes.

En ese orden de ideas, y toda vez que los institutos políticos antes señalados promovieron en candidatura común al C. Gabriel Vásquez Andrade, candidato a Presidente Municipal en Ayotlán por la coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social; lo procedente es que la imposición de la sanción correspondiente sea en arreglo a dicha circunstancia.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al **100% (ciento por ciento)** sobre el monto involucrado **\$39,853.44 (treinta y nueve mil, ochocientos cincuenta y tres pesos 44/100 M.N.)**.

En la especie, debe tenerse en cuenta que, de la presente Resolución, los partidos políticos integran la Coalición “Juntos Haremos Historia”. Por ello, es menester señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser sancionadas de manera individual tal y como lo ha sustentado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, ‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’.

Es el caso, que para fijar la sanción, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, según lo establecieron en el convenio respectivo, tal y como se establece en el artículo 340 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

En este sentido, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco mediante Acuerdos IEPC-ACG-152/2017 y IEPC-ACG-011/2018 aprobados en sesiones celebradas el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete y , determinó la procedencia del convenio de la coalición parcial denominada “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, consecuentemente en dicho convenio se determinó en las cláusulas OCTAVA (del convenio para gobernador) y NOVENA (del convenio para diputados y ayuntamientos) el porcentaje de participación de los partidos integrantes, conforme a lo siguiente:

Coalición “Juntos Haremos Historia”

Integrantes de los Ayuntamientos:

Partido Político	Porcentaje de Aportación
PT	20%
MORENA	60%
PES	20%

No obstante, lo anterior, con la finalidad de corroborar el monto de aportación de cada uno de los partidos coaligados se procedió a realizar un análisis a la información contable registrada en el Sistema Integral de Fiscalización, en la que en concatenación a lo previamente acordado por los partidos coaligados se advirtió

que el porcentaje de participación de cada uno de los partidos integrantes es el siguiente:

Sujeto Obligado	Financiamiento Público para campaña	Financiamiento Público transferido a la COA	% de distribución
Encuentro Social	2,858,834.34	1,715,300.60	23.08%
Partido del Trabajo	2,858,834.34	2,858,834.34	38.46%
Morena	2,858,834.34	2,858,834.34	38.46%
Total COA	8,576,503.02	7,432,969.28	100.00%

Esto es, del análisis al total de las aportaciones realizadas por cada instituto político integrante de la coalición “Juntos Haremos Historia”, se observa que no coincide el monto líquido con lo que convinieron, motivo por el cual esta autoridad tomará este último cálculo para imponer la sanciones que le correspondan.

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Encuentro Social**, en lo individual lo correspondiente al **23.08% (veintitrés punto ocho por ciento)** del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de **\$9,166.29 (nueve mil ciento sesenta y seis pesos 29/100 M.N.)**.

Asimismo, al **Partido del Trabajo** en lo individual lo correspondiente al **38.46% (treinta y ocho punto cuarenta y seis por ciento)** del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de **\$15,327.63 (quince mil trescientos veintisiete pesos 63/100 M.N.)**.

De igual manera, al **Partido Morena** en lo individual lo correspondiente al **38.46% (treinta y ocho punto cuarenta y seis por ciento)** del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta

alcanzar un monto líquido de **\$15,327.63 (quince mil trescientos veintisiete pesos 63/100 M.N.)**.

5. Cuantificación del monto para efectos de tope de gastos de campaña. Por lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña cabe precisar que el procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como, aquellos obtenidos o elaborados por la Unidad Técnica de Fiscalización.

Candidato	Cargo	Postulado por	Monto
Gabriel Vásquez Andrade	Presidente Municipal en Ayotlán	Coalición denominada "Juntos Haremos Historia"	\$39,853.44

Asimismo, se ordena **cuantificar** el monto detallado en el cuadro previo, al tope de gastos de campaña del referido candidato, ello en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco.

Finalmente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña.

(...)"

8. Que a continuación se detalla la sanción originalmente impuesta a la Coalición "Juntos Haremos Historia" integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social en la Resolución **INE/CG864/2018**, en su Resolutivo **TERCERO**, así como las modificaciones procedentes de acuerdo a lo razonado en el presente Acuerdo:

Resolución INE/CG864/2018			Acuerdo por el que se da cumplimiento		
Resolutivo Tercero	Monto Involucrado	Sanción	Resolutivo Tercero	Monto Involucrado	Sanción
Partido Encuentro Social	\$128,180.00	Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el	Partido Encuentro Social	\$39,853.44	Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta

Resolución INE/CG864/2018			Acuerdo por el que se da cumplimiento		
Resolutivo Tercero	Monto Involucrado	Sanción	Resolutivo Tercero	Monto Involucrado	Sanción
		Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$29,853.94 (veintinueve mil ochocientos cincuenta y tres pesos 94/100 M.N.).			alcanzar un monto líquido de \$9,166.29 (nueve mil ciento sesenta y seis pesos 29/100 M.N.).
Partido del Trabajo		Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$49,298.02 (cuarenta y nueve mil doscientos noventa y ocho pesos 02/100 M.N.).	Partido del Trabajo	\$39,853.44	Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de \$15,327.63 (quince mil trescientos veintisiete pesos 63/100 M.N.).
Partido Morena		Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$49,298.02 (cuarenta y nueve mil doscientos noventa y ocho pesos 02/100 M.N.).	Partido Morena	\$39,853.44	Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de \$15,327.63 (quince mil trescientos veintisiete pesos 63/100 M.N.).

9. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en los Considerandos **6, 7 y 8** del Acuerdo de mérito, por lo que hace al considerando **2, Apartado C**, se modifica el Punto Resolutivo **TERCERO y CUARTO** para quedar de la manera siguiente:

(...)

RESUELVE

(...)

TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el **Considerando 2**, en relación al **Apartado C** se impone al **Partido Encuentro Social** una sanción consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$9,166.29 (nueve mil ciento sesenta y seis pesos 29/100 M.N.)**.

Al **Partido del Trabajo** una sanción consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$15,327.63 (quince mil trescientos veintisiete pesos 63/100 M.N.)**.

Por último, se impone al **Partido Morena** una sanción consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$15,327.63 (quince mil trescientos veintisiete pesos 63/100 M.N.)**.

CUARTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que durante la revisión al Informe de Campaña de los Ingresos y Gastos del otrora candidato al cargo de Presidente Municipal, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco, de la coalición "Juntos Haremos Historia" se considere el monto de **\$39,853.44 (treinta y nueve mil, ochocientos cincuenta y tres pesos 44/100 M.N.)**, para efectos del **tope de gastos de campaña**, de conformidad con lo expuesto en el **Considerando 5** de la presente Resolución.

(...)"

10. Rebase de tope de gastos de campaña.

Toda vez que en el presente acatamiento, se ha modificado el monto a cuantificar al tope de gastos de campaña del otrora candidato Gabriel Vásquez Andrade, y que a raíz del acatamiento al **SG-RAP-228/2018**, se determinó sumar a tope de gastos de campaña del entonces candidato a Presidente Municipal en Ayotlán, Jalisco, un monto total de **\$4,351.87 (cuatro mil trescientos cincuenta y un pesos 87/100 M.N.)**.

Es procedente, modificar el DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE CAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES A LOS CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017 – 2018 EN EL ESTADO DE JALISCO, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General, celebrada el 06 de agosto de 2018, mediante Acuerdo **INE/CG1125/2018**, para quedar como sigue:

Anexo II

TOTAL DE GASTOS ACUMULADOS	DIFERENCIA DE PRORRATEO	TOTAL DE GASTOS NO REPORTADOS (ANEXO II A)	AJUSTES DETERMINADOS (AUMENTO / DISMINUCIÓN)	TOTAL DE GASTOS DETERMINADOS POR AUDITORÍA	TOTAL DE GASTOS	TOPE DE GASTOS	DIFERENCIA A TOPE-GASTO	% GASTOS - TOPE
\$ 51,888.49	\$ -	\$ 46,988.35	\$ -	\$ 4,351.87	\$ 51,340.22	\$ 103,228.71	\$ 138,785.68	\$ 35,556.97

En virtud de las modificaciones antes referidas, en el referido Dictamen, considerando **11.4 Coalición “Juntos Haremos Historia”**, conclusión **11_C72_P3**, se modifica para quedar como sigue:

Dictamen INE/CG1125/2018		Acuerdo por el que se da cumplimiento	
Conclusión	observación	Conclusión	Efectos
11_C72_P3	El sujeto obligado rebasó del tope de gastos de campaña por un monto de \$48,417.72	11_C72_P3	Sin efectos

Toda vez que, el Dictamen Consolidado identificado con el número de Acuerdo INE/CG1125/2018, antes referido ha sido modificado, y ya que forma parte de la motivación de la resolución INE/CG1127/2018, esto implica una modificación a las sanciones que en ella se determinan, motivo por el cual se procede a su modificación:

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE CAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, EN EL ESTADO DE JALISCO (PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES).

(...)

En este contexto, los entes sujetos de fiscalización que presentaron observaciones e irregularidades en los Informes de Campaña a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, son los siguientes:

(...)

33.11 Coalición “Juntos Haremos Historia”

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del Informe de la campaña en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado son las siguientes:

(...)

I) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones **C72_P3** y (...)

R E S U E L V E

(...)

I) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones C72_P3 y (...)

Conclusiones C72_P3

Queda sin efectos

(...)

En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

A C U E R D A

PRIMERO. Se modifica la parte conducente la Resolución **INE/CG864/2018**, aprobados en sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del C. Gabriel Vásquez Andrade, candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento constitucional de Ayotlán, Jalisco, por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/366/2018/JAL, por lo que hace a la Coalición “Juntos Haremos Historia”, respecto del considerando 2, Apartado C, en los términos precisados en los Considerandos **6, 7, 8, 9 y 10** del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se modifica la parte conducente el Dictamen Consolidado **INE/CG1125/2018** y la Resolución **INE/CG1127/2018**, aprobados en sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, derivado de la revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los Candidatos a los cargos de Gobernador, Diputado Local y Ayuntamiento correspondientes al Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, en el estado de Jalisco, por lo que hace a la Coalición “Juntos Haremos Historia”, respecto de la **conclusión C72_P3**, en los términos precisados en los Considerando **10** del presente Acuerdo.

TERCERO. Infórmese a la **Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente SG-RAP-227/2018, remitiéndole para ello copias certificadas de las constancias atinentes.

CUARTO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, por su conducto, remita el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Jalisco, y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de notificar a los sujetos interesados a la brevedad posible; por lo que se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado.

QUINTO. Hágase del conocimiento del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Jalisco, a efecto de que las multas determinadas en el presente Acuerdo sean pagadas en dicho Organismo Público Local, la cual se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya quedado firme. En términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas en este Acuerdo, serán destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables.

SEXTO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de las sanciones impuestas en el presente Acuerdo.

SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG1291/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO SCM-RAP-99/2018

A N T E C E D E N T E S

I. Aprobación de la Resolución. El seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión ordinaria el Dictamen Consolidado **INE/CG/1110/2018** y la Resolución, identificada con el número **INE/CG1111/2018**, que presentó la Comisión de Fiscalización del propio Instituto, respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Jefe de Gobierno, diputados locales y alcaldes, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la Ciudad de México.

II. Recurso de apelación. Inconforme con el Dictamen y la Resolución mencionada, el diez de agosto de dos mil dieciocho, el Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, interpuso recurso de apelación ante la Sala Superior Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a fin de controvertir la parte conducente del Dictamen y la resolución, aludidos; mismo que se tuvo por recibido el expediente, integrándose bajo el número SUP-RAP-286/2018.

El veintitrés de agosto de dos mil dieciocho la Sala Superior acordó la escisión del expediente SUP-RAP-286/2018, y ordeno remitir el expediente a la Sala Regional Ciudad de México. El veinticuatro de agosto la Sala Regional ordenó integrar el expediente con la clave SCM-RAP-99/2018.

III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Ciudad de México resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el seis de septiembre de dos mil dieciocho, determinando en su **ÚNICO** Punto Resolutivo, lo que se transcribe a continuación:

*“**ÚNICO.** Se **Revocar** la Resolución Impugnada en lo que fue materia de controversia, para los efectos precisados en la sentencia.”*

Derivado de lo anterior, en el recurso de apelación **SCM-RAP-99/2018**, se determinó:

- Por cuanto a la conclusión 10_C45_P3.

En relación con el spot publicitario del candidato José Gonzalo Espina Miranda, deberá considerar que el recurrente no se le permitió conocer con certeza el link o vínculo URL por virtud del cual se requirió al candidato observado, y en atención a ello valorar la sanción impuesta.

En relación con el spot publicitario del candidato José Giovanni Gutiérrez Aguilar, deberá pronunciarse respecto de las pólizas PN2/DR-68/06-18 y PN2/DR-70/06-18, y en su caso, revalorar la sanción.

- Por cuanto a la conclusión 10_C52_P3.

Se deberá tomar en cuenta la fe de erratas correspondiente al Punto de Acuerdo 3.6 del orden del día de la sesión de seis de agosto, para el efecto de revalorar la sanción impuesta.

En ese sentido, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 370, 425, 426, 427, numeral 1, inciso a); 428, numeral 1, incisos c) y d); 430 y 431, numeral 3, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables, en consecuencia, la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de mérito.

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, numeral 1, inciso a) y j); 190, numeral 1, 380, 370, 425, 426, 427, numeral 1, inciso a); 428, numeral 1, incisos c)

y d); 430 y 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Jefe de Gobierno, Diputados Locales y Alcaldes, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la Ciudad de México.

2. Que el seis de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Regional Ciudad de México, resolvió revocar el Dictamen Consolidado **INE/CG/1110/2018** y la Resolución **INE/CG1111/2018**, en lo que refiere a las conclusiones 10_C45_P3 y 10_C52_P3 del Considerando 33.10 correspondiente a la Coalición “Por la CDMX al Frente”, únicamente para los efectos precisados en la resolución SCM-RAP-99/2018, por lo que a fin de dar cumplimiento a la misma, se procederá a modificar el Dictamen Consolidado y la Resolución de mérito, observando a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria.

3. Que, en la sección relativa al estudio de fondo, dentro del Considerando TERCERO, el órgano jurisdiccional señaló que:

“(…)

TERCERO. Estudio de fondo

A. Respecto de la Conclusión 10_C45_P3 relativa a la omisión del Sujeto Obligado de reportar en el SIF los egresos generados por concepto de publicidad colocada en internet por un monto de \$23,200.00 (Veintitrés mil doscientos pesos 00/100 M. N.), por la cual se le impuso una sanción consistente en la reducción del 25% de sus ministraciones mensuales por la cantidad de \$14,063.84 (Catorce mil sesenta y tres pesos 84/100 M. N.), el Actor refiere que la Autoridad Responsable transgredió en su perjuicio el principio de legalidad electoral y no realizó una adecuada fundamentación y motivación.

Lo anterior porque con relación al spot publicitario del candidato José Gonzalo Espina Miranda, del link o vínculo de Facebook que la Unidad de Fiscalización refiere en las observaciones del Dictamen Consolidado, específicamente del

Anexo 13_P3, se puede apreciar que no corresponde al candidato observado, sino a uno distinto, que contendió por otro Distrito Electoral.

De ahí que el Actor señala que, si la Autoridad Responsable observó propaganda en redes sociales y procedió a imponer la sanción correspondiente con base en los links o vínculos, cuyo monitoreo realizó la Unidad de Fiscalización, estos deben ser válidos, ciertos y correctos para permitir a los sujetos obligados estar en aptitud de conocer con certeza la propaganda observada y así solventar adecuadamente los requerimientos que en ese sentido le sean realizados por la Unidad de Fiscalización.

(...)

A.Conclusión 10_C45_P3.

En relación con esta Conclusión, en la Resolución Impugnada se estableció que el PRO vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción 1, de la Ley de Partidos⁷ y el 127 del Reglamento de Fiscalización⁸ y especificó lo siguiente:

(...)

Lo anterior fue motivado por la Autoridad Responsable con base en el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de Informes del Dictamen Consolidado en el que, a su vez, la Unidad de Fiscalización concluyó que, de la verificación a la documentación proporcionada en el SIF y del análisis a la respuesta dada por el Sujeto Obligado, respecto de los testigos señalados con (2) en la columna "referencia" del Anexo 13_P3, se constató que el Sujeto Obligado omitió registrar los gastos por concepto de la edición y producción de dos videos publicados en diferentes redes sociales de los candidatos y candidatas a alcaldías y diputaciones, por lo que refirió que la observación realizada no quedó atendida .

Ahora bien, del Anexo 13_P3 del Dictamen Consolidado, se aprecia que los dos videos a que se refirió la Unidad de Fiscalización son los siguientes:

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE PARTIDOS POLÍTICOS, AGRUPACIONES POLÍTICAS Y OTROS
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018
REVISIÓN DE INFORMES DE CAMPAÑA
COALICIÓN POR LA CDMX AL FRENTE
MONITOREO EN INTERNET
PROPAGANDA LOCALIZADA EN PAGINA DE INTERNET FACEBOOK O TWITTER.

Entidad	Municipio	Partido	Candidato	URL	Página de internet	Concepto	Hallazgos Detectados	Número de Ticket	Referencia Dictamen
Ciudad de México	Benito Juárez	Por la CDMX Al Frente	José Gonzalo Espina Miranda	https://www.facebook.com/DiputadoGonzaloEspina/videos/1082484378585574/	Facebook	Spot publicitario	Lema/Versión: spot publicitario; acuérdate el primero de julio vota pan, Gonzalo Espina, Duración: 0:24, Desde loma bonita los saludo. Seguimos recorriendo las calles de Cuajimalpa, preparándonos para recuperarlo. No más corrupción en la demarcación. Demos #unpasofirmehaciaelfuturo.	123038-123071	2
Ciudad de México	Coyoacán	Por la Cd Mex al Frente	Manuel Negrete, Jose Giovanni Gutiérrez	https://www.facebook.com/GiovanniGutierrezA/videos/2199526470333777/	Facebook	Spot publicitario	Vídeo profesional, ubicado en la página de facebook oficial del candidato pedro giovani, en donde aparece el, proponiendo incentivar inversiones para generar empleos y te invita a votar por el y por el alcalde de coyoacan manuel negrete arias, mismo que aparece en el vídeo	149790-149823	2

(...)

*En atención a lo anterior, esta Sala Regional estima que el agravio del Actor es **fundado**, toda vez que, tal y como lo demuestra, el link o vínculo URL que la Unidad de Fiscalización tomó en cuenta para soportar la Conclusión estudiada y tenerla como no solventada, no corresponde al candidato observado.*

(...)

Por ende, no era posible que el Sujeto Obligado estuviera en aptitud de conocer el spot publicitario motivo de la sanción impuesta y que correspondía al candidato observado, es decir, a José Gonzalo Espina Miranda, con lo cual no se le permitió la posibilidad de verificar el video respecto del cual debía comprobar la documentación solicitada por la Unidad de Fiscalización.

Lo anterior derivó en una indebida motivación de la Resolución Impugnada, pues la Autoridad Responsable soportó su sanción sobre la base del incumplimiento del Sujeto Obligado; sin embargo, como ha quedado

comprobado , la Unidad de Fiscalización no fue coherente al requerir al Actor que presentara ante el SIF la documentación que comprobara el gasto correspondiente al video que dijo observar respecto del candidato José Gonzalo Espina Miranda.

Con lo anterior, el Actor no estuvo en posibilidad de emitir una contestación igualmente coherente, cierta, completa y total respecto de la observación realizada, lo que derivó en la Conclusión controvertida y trajo como consecuencia la imposición de una sanción por parte de la Autoridad Responsable, sin valorar el hecho de que al Partido no se le permitió percatarse adecuadamente la fuente de esta.

*De ahí lo **fundado** de su agravio.*

(...)

B. Conclusión 10_C52_P3.

Por cuanto hace a esta Conclusión, el Consejo General sentó en la Resolución Impugnada que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los gastos efectuados por concepto de Facebook, en diez de las contabilidades de los sujetos obligados de la Coalición, con un monto involucrado de hasta \$1'337,622.32 (Un millón trescientos treinta y siete mil seiscientos veintidós pesos 32/100 M. N.), con lo cual vulneraba lo dispuesto por los artículos 127, numeral 1 , en relación con el 46 bis del Reglamento de Fiscalización.

Por lo anterior, al formular la imposición de la sanción de manera específica por cuanto a esa Conclusión, de la Resolución Impugnada se puede advertir que la Autoridad Responsable determinó lo siguiente:

(...)

Con base en lo expuesto, es evidente que el Consejo General le impuso al PRD una sanción por un monto total de \$810,866.65 (ochocientos diez mil ochocientos sesenta y seis pesos 65/100 M. N.).

En ese sentido, el Recurrente manifiesta que la Autoridad Responsable debió tomar en cuenta la fe de erratas que se circuló previamente al inicio de la sesión en la que se aprobaron tanto el Dictamen Consolidado como la Resolución Impugnada, pues en ella se contenía un monto involucrado menor al que se asentó en la Resolución Impugnada y que derivó en la imposición de una sanción con base en una cantidad errónea.

En ese sentido, a consideración de esta Sala Regional, el agravio del Recurrente se estima **fundado**, porque del requerimiento formulado a la Unidad de Fiscalización se desprende que, en efecto, la fe de erratas en la cual el Recurrente descansa su agravio sí modificó el monto involucrado en la Conclusión cuyo estudio nos ocupa, de la siguiente forma:

En el Dictamen 10_COA

En la página 232, ID152, conclusión 10_C52_P3 dice:

Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
<p>No atendida</p> <p>De la verificación al SIF, se determinó los siguiente:</p> <p>Respecto a lo señalado con (1) (...) en la normatividad, quedó atendida.</p> <p>Respecto a lo señalado con (2) en la columna "Referencia del Anexo B del presente Dictamen, la respuesta se consideró insatisfactoria, de la verificación al SIF, no se localizó gastos por concepto de administración y manejo de redes sociales; por tal razón, observación no quedo atendida.</p>	<p>10_C52_P3</p> <p>El sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los gastos efectuados por concepto de Facebook, en 10 de las contabilidades de los sujetos obligados de la Coalición, hasta por una diferencia total de \$1,337,622.32.</p>	Egreso no reportado	Artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP y 127 del RF

Debe decir:

Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
<p>No atendida</p> <p>De la verificación al SIF, se determinó los siguiente:</p> <p>Respecto a lo señalado con (1) (...) en la normatividad, <i>por tal razón, por lo que refiere a estos puntos</i>, la observación quedó atendida.</p> <p>Respecto a lo señalado con (2) en la columna "Referencia del Anexo B del presente Dictamen, la respuesta se consideró insatisfactoria, <i>toda vez que de la verificación al SIF, se constató que el sujeto obligado omitió presentar los comprobantes de pago por el tercero al proveedor en el extranjero, por \$26,042.57; por tal razón, por lo que se refiere a estos puntos</i> la observación no quedó atendida.</p>	<p>10_C52_P3</p> <p>El sujeto obligado omitió <i>presentar la documentación soporte de 3 pólizas por concepto de gastos en internet que no presentó los comprobantes de pago por el tercero al proveedor en el extranjero, por un monto de \$26,042.57.</i></p>	Egreso no comprobado por propaganda contratada en internet con o sin intermediario	Artículo 127, numeral 1, en relación con el 46 bis del RF

De la transcripción anterior, esta Sala Regional arriba a la conclusión de que, a pesar de que la Autoridad Responsable aprobó por mayoría el Dictamen Consolidado, la Resolución Impugnada y la fe de erratas que fue circulada previamente, esta última no se vio reflejada en la Resolución Impugnada puesto que subsistió el monto por la cantidad de \$1'337,622.32 (Un millón trescientos treinta y siete mil seiscientos veintidós pesos 32/100 M. N.).

Como consecuencia de lo anterior, el Consejo General procedió a imponer una sanción de índole económica equivalente al 100 % sobre el monto involucrado, es decir, sobre la cantidad de \$1'337,622.32 (Un millón trescientos treinta y siete mil seiscientos veintidós pesos 32/100 M. N.), deduciendo así que, al PRO, en lo individual le correspondía el 61% del monto total de la sanción, es decir, la cantidad de \$810,866.65 (Ochocientos diez mil ochocientos sesenta y seis pesos 65/100 M. N.).

Conforme a ello, la Autoridad Responsable tomó como base de la sanción impuesta al Recurrente, el monto involucrado erróneo, pues no consideró la fe de erratas que se circuló con antelación a la sesión y que también fue aprobada en conjunto con el Dictamen Consolidado y la Resolución Impugnada.

En virtud de esto, la Autoridad Responsable vulneró los principios legalidad y certeza jurídica en agravio del Actor porque impuso una sanción con base en preceptos y hechos discordantes entre sí, pues la sanción aprobada se soportó sin valorar la nueva cantidad que se estipuló en la fe de erratas. De ahí lo fundado del agravio.

Sentido de la sentencia.

*Al resultar **fundados** los agravios, se debe revocar la Resolución Impugnada, en la parte materia de la controversia, para el efecto de que la Unidad de Fiscalización, así como el Consejo General, según su ámbito de competencia, dentro del plazo de diez días contados a partir de la notificación de la presente sentencia, realicen lo siguiente:*

1. Por cuanto a la Conclusión 10_C45_P3

a) *En relación con el spot publicitario del candidato José Gonzalo Espina Miranda, deberán considerar que al Recurrente no se le permitió conocer con certeza el link o vínculo URL por virtud del cual se requirió al candidato observado, y en atención a ello, revalorar la sanción impuesta.*

b) *En relación con el spot publicitario del candidato José Giovanni Gutiérrez Aguilar, deberá pronunciarse respecto de las pólizas PN2/DR-68/06-18,*

PN2/DR-69/06-18 y PN2/DR- 70/06-18, y en su caso, revalorar la sanción impuesta.

*2.Por cuanto a la Conclusión **10_C52_P3**, el Consejo General deberá tomar en cuenta la fe de erratas correspondiente al Punto de Acuerdo 3.6 del orden del día de la sesión de seis de agosto, para el efecto de revalorar la sanción impuesta.*

(...)”

En ese orden de ideas, esta autoridad procede a emitir la modificación al Dictamen y a la resolución ordenada, dando cumplimiento, en lo relativo a las conclusiones 10_C45_P3 y 10_C52_P3, del considerando 33.10 en los términos que se precisan en la misma.

4. Que, conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso del recurso de apelación identificado como **SCM-RAP-99/2018**.

Es importante señalar que el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la determinación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) respecto del valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, el cual será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país,¹⁷ mismo que para el ejercicio 2018, correspondió a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.).

Lo anterior de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo precedente establece “*A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes*

¹⁷De conformidad con el Punto Resolutivo PRIMERO de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de 2016, publicada el pasado 18 de diciembre de 2015, “*para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales (Delegaciones) del Distrito Federal.*”

federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.”

En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de Medida y Actualización; por lo que, las multas impuestas en el presente Acuerdo, a las que les corresponde la aplicación del salario mínimo general vigente en el entonces Distrito Federal para el ejercicio 2018, se ajustan al valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente en 2018.

de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las condiciones socio económicas del ente infractor.

Bajo esta tesitura, debe considerarse que los partidos políticos sujetos al procedimiento de fiscalización que cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que, en su caso, se les imponga, toda vez que mediante el Acuerdo IECM-ACU-CG-005-18 emitido por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de la Ciudad de México, se les asignó como financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2018, los montos siguientes:

Partido Político	Financiamiento público actividades ordinarias 2018
Partido Acción Nacional	\$57,248,474.97
Partido de la Revolución Democrática	\$77,417,426.45
Movimiento Ciudadano	\$29,420,417.54

En este sentido el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales remitió el oficio IECM/DEAP/1342/18 suscrito por la Directora Ejecutiva de Asociaciones Políticas mediante el cual informó lo siguiente:

- Por lo que hace a los partidos políticos que a continuación se señalan, existen saldos pendientes por pagar:

ID	Partido Político	Resolución de la Autoridad	Monto total de la sanción	Montos de las deducciones realizadas al mes de JULIO de 2018	Montos por saldar	Total
3	Partido de la Revolución Democrática	INE/CG779/2015 (reducción)	\$4,823,248.00	\$3,587,425.12	\$1,235,822.88	\$1,235,822.88
		INE/CG490/2018 (multa)	\$1,509.80	\$1,509.80	\$0.00	
		INE/CG319/2018 (multa y reducciones)	\$621,583.30	\$621,583.30	\$0.00	
		INE/CG487/2018 (reducción)	\$924,752.50	\$924,752.50	\$0.00	

Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que los partidos políticos con financiamiento local y federal, tienen la capacidad económica suficiente con la cual puedan hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en la presente Resolución.

En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, pues aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean establecidas conforme a la normatividad electoral.

Cabe señalar que, en el caso de las sanciones impuestas a los partidos políticos con acreditación local considerando la capacidad económica del ente nacional, la ejecución de las sanciones se realizará por la autoridad electoral nacional, por lo que se procederá al cobro de las sanciones conforme a los criterios establecidos por el Instituto Nacional Electoral para los efectos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ahora bien, por lo que hace a la capacidad económica de los partidos políticos que recibieron financiamiento público estatal, con la finalidad de no afectar las actividades ordinarias del mismo, el pago de las sanciones económicas que en su caso se impongan se realizará en términos del Acuerdo INE/CG61/2017.

Esto es, las sanciones económicas impuestas con base en la capacidad económica estatal, deberán ejecutarse por el Organismo Público Local de la entidad federativa, para lo cual dicho organismo deberá considerar, en términos de

lo dispuesto en el Lineamiento Sexto, apartado B del Acuerdo INE/CG61/2017, lo siguiente:

- Una vez que las sanciones impuestas por la autoridad electoral nacional queden firmes, sea por determinación de la autoridad jurisdiccional correspondiente o por que las mismas no hayan sido materia de impugnación, las sanciones se harán efectivas a partir del mes siguiente en que queden firmes.
- De conformidad con lo anterior, el Organismo Público Local deberá llevar el registro de las notificaciones realizadas a los sujetos obligados en la entidad federativa correspondiente, de las sanciones impuestas con cargo al financiamiento público estatal, en los formatos que para tal efecto proporcione la Dirección Jurídica de este Instituto, en cumplimiento del artículo Transitorio PRIMERO del Acuerdo INE/CG61/2017.
- El área competente de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales informará a los Organismos las sanciones que hayan quedado firmes.

Para lo anterior, la Unidad Técnica de Vinculación deberá remitir oportunamente las constancias de notificación correspondientes a la Dirección Jurídica.

- Para la ejecución de las sanciones el Organismo Público Local deberá considerar un descuento económico que no puede exceder del 25% (cincuenta por ciento) del financiamiento público mensual que reciba el instituto político en la entidad para el desarrollo de sus actividades ordinarias.

Conforme lo anterior, el Organismo Público Local fijará las sanciones a ejecutar en el mes correspondiente; considerando en todo momento, que de existir un conjunto de sanciones firmes pendientes de cobro por un importe superior al 25% del financiamiento público del partido político, éstas deberán ser cobradas conforme al orden en que quedaron firmes, en el entendido que no podrá descontarse un importe menor al equivalente al porcentaje antes mencionado; por lo que de acuerdo al monto de sanción, podrá acumular para su ejecución el número de sanciones necesarias hasta que queden completamente pagadas.

- Las sanciones impuestas y cobradas con recursos provenientes del financiamiento público estatal deberán de ser destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en términos de las disposiciones aplicables, por lo que se estará a lo establecido en el resolutivo respectivo, en términos de lo dispuesto en el Lineamiento Sexto, Apartado B, numeral 2 del Acuerdo INE/CG61/2017.
- El Organismo Público Local verificará en el plazo de 15 días hábiles siguientes a que estén firmes las sanciones impuestas a los candidatos, si los sujetos obligados realizaron el pago de forma voluntaria; para lo cual deberá atender la forma de pago que ordene la presente Resolución; para ello, dicho Organismo pondrá a disposición de los sujetos obligados las formas o procedimientos que les faciliten realizar el pago.
- Los OPLE deberán emitir un informe al corte de cada mes, que contenga las sanciones cobradas en dicho periodo, mismo que será hecho del conocimiento de la Unidad de Vinculación del Instituto, en términos de lo dispuesto en el Lineamiento Sexto, Apartado B, numeral 2 del Acuerdo INE/CG61/2017.

Por otra parte, en caso que las sanciones económicas sean impuestas con base en la capacidad económica federal, deberá procederse en términos de lo dispuesto en el Acuerdo INE/CG61/2017, en lo específico en el Lineamiento Sexto, apartado B, numeral 1, incisos c) y d) en relación al Apartado A del mismo Lineamiento.

Las sanciones impuestas y cobradas deberán de ser destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en términos de las disposiciones aplicables.

En el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México se registró ante el Organismo Público Local la siguiente coalición parcial para contender a diversos cargos de elección (1 Jefatura de Gobierno, 33 Diputaciones Locales y 16 Alcaldías), para tal efecto, en el convenio de coalición correspondiente se estableció el monto de recursos que cada uno aportaría.

Coalición “Por la CDMX al Frente”

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México mediante Resolución IECM-RS-CG-39/2017 aprobada en sesión pública celebrada el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, determinó la procedencia del convenio de la coalición parcial denominada “Por la CDMX al Frente” integrada por los partidos políticos Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano consecuentemente en dicho convenio se determinó en la Cláusula Décima Tercera el porcentaje de participación de los partidos integrantes, conforme a lo siguiente:

Elección de Jefe de Gobierno

Partido Político	Porcentaje de Aportación
PAN	40%
PRD	50%
MC	40%

Elección de Diputados Locales

Partido Político	Porcentaje de Aportación
PAN	30%
PRD	25%
MC	30%

Integrantes de los Ayuntamientos

Partido Político	Porcentaje de Aportación
PAN	30%
PRD	25%
MC	30%

Cabe señalar que en el convenio se determinó como porcentaje de aportación de financiamiento de los partidos integrantes según la candidatura, éste no determina el grado de participación de cada integrante tuvo en la misma; no obstante lo anterior, del análisis a dichos porcentajes a la luz de información contable

registrada en el Sistema Integral de Fiscalización, se advirtió que el porcentaje de participación de cada uno de los partidos integrantes es el siguiente:

Sujeto Obligado	Financiamiento Público para campaña	Financiamiento Público transferido a la COA	Factor
	A	B	$(B*100A)/B=C$
PAN	28,624,237.49	10,369,704.55	16%
PRD	38,708,713.23	38,146,975.96	61%
MC	14,710,208.76	14,416,004.58	23%
Total COA	82,043,159.48	62,932,685.09	100.00%

En ese sentido, la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, **‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’**¹⁸.

En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización

Asimismo, es importante señalar el criterio orientador emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la sentencia recaída al recurso de apelación SUP-RAP-196-2017 y su acumulado, relativo a la responsabilidad compartida de todos los partidos integrantes de una coalición en las faltas que cometa el encargado de finanzas de la misma, el cual para mayor claridad se transcribe a continuación:

“(…)
*Son infundados los agravios porque contrario a lo que argumenta el partido apelante, **éste también es responsable de la comisión de las infracciones que en materia de fiscalización se le atribuyen a la Coalición, dado que formó parte de ésta para postular a un mismo***

¹⁸Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 128.

candidato a Gobernador y conforme a lo estipulado en la Ley General de Partidos Políticos y el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, al **celebrar el convenio de coalición respectivo, autorizó la creación de un “Órgano Estatal de Administración” encargado de las finanzas de ésta, integrado por los responsables de finanzas de los partidos coaligados**, un representante designado por el candidato a gobernador y coordinado por el Titular de la Tesorería Estatal del Partido Acción Nacional, para que reportara la aplicación de la contribución del financiamiento público que aportó para la campaña electoral mediante los informes correspondientes, y por tanto, la actuación de dicho órgano, implicó que los actos que éste realizó en materia de fiscalización, **los realizó a nombre de sus representados, de manera que válidamente pueden imputarse directamente a sus representados, y por tanto, la responsabilidad en la presentación de los informes de campaña es compartida por todos los integrantes de la coalición tal como se demuestra en apartado posterior.**

(...)


En este sentido, lo estipulado en el convenio de coalición respecto a que cada una de las partes respondería en forma individual por las faltas en que incurriera alguno de los partidos suscriptores o sus militantes asumiendo la sanción correspondiente, debe entenderse respecto a aquellas que se cometan en una materia distinta a la fiscalización, **porque como se analizó el representante de finanzas de la coalición actuó en nombre y representación de todos los partidos coaligados en esta materia.**

De igual modo, lo pactado en el convenio en cuanto a que “cada partido, sus precandidatos y candidatos, de forma individual responderá por las sanciones que imponga la Autoridad Electoral Fiscalizadora” debe entenderse como una responsabilidad que surge en el interior de la coalición para aportarle al representante de finanzas de la coalición toda la documentación necesaria para que éste pueda ejercer su función, en el entendido de que, como ya se explicó **las faltas que cometa dicho representante en materia de fiscalización se imputan a toda la coalición.**

(...)”

[Énfasis añadido]

5. Que, derivado de lo anterior, el Dictamen relativo a las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Jefe de Gobierno, Diputados Locales y Alcaldes correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México, identificado como INE/CG1110/2017, apartado 10 correspondiente a la Coalición “Por la CDMX al Frente”, fue modificado en los siguientes términos:

Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/37800/18	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
<p>Monitoreo Internet</p> <p>Derivado del monitoreo en internet, se observó propaganda que el sujeto obligado omitió reportar en los informes de campaña. Como se muestra en el Anexo 42.</p> <p>Se solicita presentar en el SIF, lo siguiente:</p> <p>En caso que los gastos hayan sido realizados por el sujeto obligado:</p> <p>-El o los comprobantes que amparen los gastos efectuados con todos los requisitos establecidos en la normativa.</p> <p>-Las evidencias del pago y, en caso de que éstos hubiesen excedido lo equivalente a 90 UMA, las copias de los cheques correspondientes con la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”.</p> <p>-El o los contratos de arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de servicios, debidamente requisitados y firmados.</p> <p>-El o los avisos de contratación respectivos.</p> <p>• En caso de que correspondan a aportaciones en especie:</p> <p>-El o los recibos de aportación con la totalidad de requisitos establecidos en la normativa.</p> <p>-El o los contratos de donación o comodato, debidamente requisitados y firmados.</p> <p>-El control de folios que establece el RF, en donde se identifiquen los recibos utilizados, cancelados y pendientes de utilizar.</p> <p>-Dos cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por cada aportación realizada.</p> <p>-Evidencia de la credencial para votar de los aportantes.</p>	<p>No atendida</p> <p>De la verificación a la documentación proporcionada en el SIF, se determinó lo siguiente:</p> <p>Respecto el testigo señalado con la dirección señalada con la URL https://www.facebook.com/DiputadoGonzaloEspina/videos/1082484378585574/, se constató que el video se encuentra alojado en el perfil de la red social Facebook del otrora candidato a diputado local Héctor Barrera Marmolejo por el Distrito local XXVI, tal y como se muestra a continuación:</p>  <p>De la verificación a los registros contables en el SIF, se constató que los gastos por concepto de la transmisión en vivo del evento del otrora candidato Héctor Barrera Marmolejo se encuentran debidamente registrados; por tal razón, por lo que se refiere a este punto, la observación quedó atendida.</p> <p>Ahora bien, respecto al video publicitario señalado con la URL https://www.facebook.com/GiovaniGutierrezA/videos/2199526470333777/, y en acatamiento a la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se procedió a verificar las pólizas PN2/DR-68/06-18, PN2/DR-69/06-18, y PN2/DR-70/06-18; en las cuales se constató que los gastos reportados corresponden a publicidad colocada en la red social twitter, así mismo, dichas publicaciones</p>	<p>10_C45_P3</p> <p>El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de publicidad colocada en internet por un monto de \$11,600.00</p> <p>El prorrateo a los candidatos beneficiados se indica en el anexo II-A, “Monitoreo Vía Pub – Prorrateo” Cons. 2.1 y 2.2</p> <p>De conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2 de la LGIPE y 192 del RF, el costo determinado se acumulará a los gastos de campaña.</p>	<p>Egreso no reportado</p>	<p>Artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP y 127 del RF</p>

Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/37800/18	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió																										
<p>En caso de una transferencia en especie:</p> <p>-Los contratos de donación o comodato, debidamente requisitados y firmados.</p> <p>-Factura o cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por el inmueble otorgado en comodato.</p> <p>-El recibo interno correspondiente.</p> <p>En todos los casos:</p> <p>-El registro del ingreso y gasto en su contabilidad.</p> <p>-El informe de campaña con las correcciones.</p> <p>-Muestras y/o fotografías de la propaganda.</p> <p>-Las aclaraciones que a su derecho convengan.</p> <p>Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la LGPP; 25, numeral 1, inciso i); 54, numeral 1; 55, numeral 1; 56, numerales 3, 4 y 5; 61, numeral 1, inciso f), fracción III; 63, 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la LGPP; 26, numeral 1, inciso a); 33, numeral 1, inciso i); 37, 38, 46, numeral 1; 47, numeral 1, inciso a); 74, 96, numeral 1; 105, 106, 107, numerales 1 y 3; 126, 127, 143, numeral 1, inciso d), fracción IV; 143 Bis, 237, 243 y 245, del RF.</p>	<p>no coinciden con el video señalado en la URL; por tal razón, la observación no quedó atendida.</p> <p>Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado en beneficio de sus candidatos, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF descrito en el apartado correspondiente del presente Dictamen.</p> <p>Identificación del costo para valuación en la Matriz de Precios (Pesos)</p> <table><tr><th>Id matriz de precios</th><th>Proveedor</th><th>Concepto</th><th>Unidad de medida</th><th>Importe con IVA</th></tr><tr><td>2770</td><td>N Media S de RL de CV</td><td>Video</td><td>Servicio</td><td>\$ 11,600.00</td></tr></table> <p>Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen Consolidado la matriz de precios correspondiente a la entidad.</p> <p>La determinación del costo se presenta en el anexo II-A, "Internet – Directo" Cons. 9.</p> <p>De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar un video valuado en \$11,600.00</p> <p>Asimismo, de las evidencias del monitoreo se constató que dicho hallazgo benefició a los candidatos siguientes:</p> <table><tr><th>Nombre</th><th>ID de conta</th><th>Rubro</th><th>Beneficio</th></tr><tr><td>Manuel Negrete Arias José</td><td>47612</td><td>Video</td><td>8,328.59</td></tr><tr><td>Giovani Gutiérrez Aguilar</td><td>49561</td><td>Video</td><td>3,271.41</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>\$11,600.00</td></tr></table> <p>El prorrateo se detalla en el anexo II-A, "Internet – Prorrateo" Cons. 2.1 al 2.2.</p> <p>De conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2, inciso a) de la LGIPE, y 192 del RF, el costo determinado se acumulará a los gastos de campaña.</p>	Id matriz de precios	Proveedor	Concepto	Unidad de medida	Importe con IVA	2770	N Media S de RL de CV	Video	Servicio	\$ 11,600.00	Nombre	ID de conta	Rubro	Beneficio	Manuel Negrete Arias José	47612	Video	8,328.59	Giovani Gutiérrez Aguilar	49561	Video	3,271.41	TOTAL			\$11,600.00			
Id matriz de precios	Proveedor	Concepto	Unidad de medida	Importe con IVA																										
2770	N Media S de RL de CV	Video	Servicio	\$ 11,600.00																										
Nombre	ID de conta	Rubro	Beneficio																											
Manuel Negrete Arias José	47612	Video	8,328.59																											
Giovani Gutiérrez Aguilar	49561	Video	3,271.41																											
TOTAL			\$11,600.00																											

6. Que en tanto la Sala Regional Ciudad de México, dejó intocadas las demás consideraciones que sustentan la Resolución identificada como **INE/CG1111/2018**, este Consejo General únicamente se avocará al estudio y análisis de lo relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional,

que se encuentran en el considerando **33.10**, conclusiones **10_C45_P3** y **10_C52_P3** en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Regional Ciudad de México, materia del presente Acuerdo.

Visto lo anterior, se modifica la imposición de la sanción para quedar en los términos siguientes:

(...)

33.10 COALICIÓN “POR LA CDMX AL FRENTE”

(...)

d) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras de los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización: **Conclusiones: (...), 10_C45_P3, (...) y 10_C52_P3.**

No.	Conclusión	Monto involucrado
(...)	(...)	(...)
10_C45_P3	<i>El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de publicidad colocada en internet por un monto de \$23,200.00</i>	\$23,200.00
(...)	(...)	(...)
10-C52-P3	<i>El sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte de 3 pólizas por concepto de gastos en internet que no presento los comprobantes de pago por el tercero al proveedor en el extranjero, por un monto de \$26,042.57</i>	\$26,042.57

(...)

Conclusión 10_C45_P3

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el

sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.

- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al /Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$11,600.00 (once mil seiscientos pesos 00/100 M.N.).

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹⁹

¹⁹ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al **100% (cien por ciento)** sobre el monto involucrado cantidad que asciende a un total de **\$11,600.00 (once mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)**

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Acción Nacional** en lo individual lo correspondiente al 16% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25%(veinticinco por ciento)** de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$1,856 (mil ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.)**.

Asimismo, al **Partido de la Revolución Democrática** en lo individual lo correspondiente al 61% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25%(veinticinco por ciento)** de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$7,076 (siete mil sesenta y seis pesos 00/100 M.N.)**.

Por último, a **Movimiento Ciudadano** en lo individual lo correspondiente al 23% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25%(veinticinco por ciento)** de las siguientes ministraciones

mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$2,668 (dos mil seiscientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

(...)

Conclusión 10 C52 P3

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al /Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida.

- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$26,042.57 (veintiséis mil cuarenta y dos pesos 57/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.²⁰

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al **100% (cien por ciento)** sobre el monto involucrado **\$26,042.57 (veintiséis mil cuarenta y dos pesos 57/100 M.N.)**.

²⁰ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Acción Nacional** en lo individual lo correspondiente al 16% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$4,166.81 (cuatro mil ciento sesenta y seis pesos 81/100 M.N.)**.

Asimismo, al **Partido de la Revolución Democrática** en lo individual lo correspondiente al 61% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$15,885.96 (quince mil ochocientos ochenta y cinco pesos 96/100 M.N.)**.

Por último, a **Movimiento Ciudadano** en lo individual lo correspondiente al 23% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$5,989.79 (cinco mil novecientos ochenta y nueve pesos 79/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

(...)

7. Que la sanción originalmente impuesta a la Coalición “Por la CDMX al Frente”, en la resolución **INE/CG1111/2018** en su Resolutivo **DÉCIMO**, así como las modificaciones procedentes con base a lo razonado en el presente Acuerdo:

Sanciones en Resolución INE/CG1111/2018	Modificación	Sanción en Acatamiento a SCM-RAP-99/2018
<p>DÉCIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 33.10 de la presente Resolución, se imponen a la coalición “Por la CDMX al Frente”, las sanciones siguientes:</p> <p>(...)</p> <p>d) 8 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones (...) 10_C45_P3, (...).</p> <p>(...)</p> <p>Conclusión 10_C45_P3</p> <p>Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado cantidad que asciende a un total de \$23,200.00 (Veintitrés mil doscientos pesos 00/100 M. N.)</p> <p>Partido Acción Nacional:</p> <p>La reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de \$3,823.36 (tres mil ochocientos veintitrés pesos 36/100 M.N.).</p> <p>Partido de la Revolución Democrática:</p> <p>La reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$14,063.84 (catorce mil sesenta y tres pesos 84/100 M.N.).</p> <p>Movimiento Ciudadano:</p> <p>La reducción del 25% (veinticinco por</p>	<p>Derivado a lo ordenado por la Sala Regional y de la verificación a la documentación proporcionada en el SIF, se determinó lo siguiente:</p> <p>Respecto el testigo señalado con la dirección señalada con la URL https://www.facebook.com/DiputadoGonzaloEspin/videos/1082484378585574/, se constató que el video se encuentra alojado en el perfil de la red social Facebook del otrora candidato a diputado local Héctor Barrera Marmolejo por el Distrito local XXVI, tal y como se muestra a continuación:</p>  <p>De la verificación a los registros contables en el SIF, se constató que los gastos por concepto de la transmisión en vivo del evento del otrora candidato Héctor Barrera Marmolejo se encuentran debidamente registrados; por tal razón, por lo que se refiere a este punto, la observación quedó atendida.</p> <p>Ahora bien, respecto al video publicitario señalado con la URL https://www.facebook.com/GiovaniGutierrezA/videos/2199526470333777/, y en acatamiento a la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se procedió a verificar las pólizas PN2/DR-68/06-18, PN2/DR-69/06-18, y PN2/DR-70/06-18; en las cuales se constató que los gastos reportados corresponden a publicidad colocada en la red social twitter, así mismo, dichas publicaciones no coinciden con el video señalado en la URL; por tal razón, la observación no quedó atendida.</p> <p>Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado en beneficio de sus candidatos, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF descrito en el apartado correspondiente del presente Dictamen.</p> <p>Identificación del costo para valuación en la Matriz de Precios (Pesos)</p>	<p>DÉCIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 33.10 de la presente Resolución, se imponen a la coalición “Por la CDMX al Frente”, las sanciones siguientes:</p> <p>(...)</p> <p>d) 8 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones (...) 10_C45_P3, (...).</p> <p>(...)</p> <p>Conclusión 10_C45_P3</p> <p>Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado cantidad que asciende a un total de \$11,600.00 (once mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)</p> <p>Partido Acción Nacional</p> <p>La reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de \$1,856 (mil ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.).</p> <p>Partido de la Revolución Democrática</p> <p>La reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en</p>

Sanciones en Resolución INE/CG1111/2018	Modificación	Sanción en Acatamiento a SCM-RAP-99/2018																										
<p>ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$5,315.12 (cinco mil trescientos quince pesos 12/100 M.N.).</p>	<table><tr><th>Id matriz de precios</th><th>Proveed or</th><th>Conc epto</th><th>Unidad de medida</th><th>Importe con IVA</th></tr><tr><td>2770</td><td>N Media S de RL de CV</td><td>Video</td><td>Servicio</td><td>\$ 11,600.00</td></tr></table> <p>Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen Consolidado la matriz de precios correspondiente a la entidad.</p> <p>La determinación del costo se presenta en el anexo II-A, "Internet – Directo" Cons. 9.</p> <p>De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar un video valuado en \$11,600.00</p> <p>Asimismo, de las evidencias del monitoreo se constató que dicho hallazgo benefició a los candidatos siguientes:</p> <table><tr><th>Nombre</th><th>ID de conta</th><th>Rubro</th><th>Beneficio</th></tr><tr><td>Manuel Negrete Arias</td><td>47612</td><td>Video</td><td>8,328.59</td></tr><tr><td>José Giovanni Gutiérrez Aguilar</td><td>49561</td><td>Video</td><td>3,271.41</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>\$11,600.00</td></tr></table> <p>El prorrato se detalla en el anexo II-A, "Internet – Prorrato" Cons. 2.1 al 2.2.</p> <p>De conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2, inciso a) de la LGIPE, y 192 del RF, el costo determinado se acumulará a los gastos de campaña.</p>	Id matriz de precios	Proveed or	Conc epto	Unidad de medida	Importe con IVA	2770	N Media S de RL de CV	Video	Servicio	\$ 11,600.00	Nombre	ID de conta	Rubro	Beneficio	Manuel Negrete Arias	47612	Video	8,328.59	José Giovanni Gutiérrez Aguilar	49561	Video	3,271.41	TOTAL			\$11,600.00	<p>que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de \$7,076 (siete mil sesenta y seis pesos 00/100 M.N.).</p> <p>Movimiento Ciudadano</p> <p>La reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de \$2,668 (dos mil seiscientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.).</p>
	Id matriz de precios	Proveed or	Conc epto	Unidad de medida	Importe con IVA																							
	2770	N Media S de RL de CV	Video	Servicio	\$ 11,600.00																							
	Nombre	ID de conta	Rubro	Beneficio																								
	Manuel Negrete Arias	47612	Video	8,328.59																								
	José Giovanni Gutiérrez Aguilar	49561	Video	3,271.41																								
	TOTAL			\$11,600.00																								
	<p>DÉCIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 33.10 de la presente Resolución, se imponen a la coalición "Por la CDMX al Frente", las sanciones siguientes:</p> <p>(...)</p> <p>d) 8 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 10_C52_P3.</p> <p>(...)</p> <p>Conclusión 10_C52_P3</p> <p>Partido Acción Nacional:</p>		<p>DÉCIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 33.10 de la presente Resolución, se imponen a la coalición "Por la CDMX al Frente", las sanciones siguientes:</p> <p>(...)</p> <p>d) 8 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones (...)10_C52_P3.</p> <p>(...)</p> <p>Conclusión 10_C52_P3</p>																									

Sanciones en Resolución INE/CG1111/2018	Modificación	Sanción en Acatamiento a SCM-RAP-99/2018
<p>La reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de \$220,440.16 (doscientos veinte mil cuatrocientos cuarenta pesos 16/100 M.N.).</p> <p>Partido de la Revolución Democrática:</p> <p>La reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$810,866.65 (ochocientos diez mil ochocientos sesenta y seis pesos 65/100 M.N.).</p> <p>Movimiento Ciudadano:</p> <p>La reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$306,449.27 (trescientos seis mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 27/100 M.N.).</p> <p>(...)</p>	<p>Se modifica la imposición de la sanción a partir del monto involucrado de \$26,042.57</p>	<p>Partido Acción Nacional:</p> <p>La reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de \$4,166.81 (cuatro mil ciento sesenta y seis pesos 81/100 M.N.).</p> <p>Partido de la Revolución Democrática:</p> <p>La reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$15,885.96 (quince mil ochocientos ochenta y cinco pesos 96/100 M.N.).</p> <p>Movimiento Ciudadano:</p> <p>La reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$5,989.79 (cinco mil novecientos ochenta y nueve pesos 79/100 M.N.).</p>

Sanciones en Resolución INE/CG1111/2018	Modificación	Sanción en Acatamiento a SCM-RAP-99/2018
		(...)

8. Que, de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el presente Acuerdo, se impone a la **Coalición “Por la CDMX al Frente”**, las sanciones siguientes:

QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando **33.5** de la presente Resolución, se imponen a la **Coalición “Por la CDMX al Frente”**, las sanciones siguientes:

(...)

d) 8 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones **10_C45_P3**, (...) y **10_C52_P3**.

(...)

Conclusión 10_C45_P3

Partido Acción Nacional:

La reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$1,856 (mil ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.)**.

Partido de la Revolución Democrática:

La reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$7,076 (siete mil sesenta y seis pesos 00/100 M.N.)**.

Movimiento Ciudadano:

La reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$2,668 (dos mil seiscientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.)**.

(...)

Conclusión 10 C52 P3

Partido Acción Nacional:

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$4,166.81 (cuatro mil ciento sesenta y seis pesos 81/100 M.N.)**.

Partido de la Revolución Democrática:

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$15,885.96 (quince mil ochocientos ochenta y cinco pesos 96/100 M.N.)**.

Movimiento Ciudadano:

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$5,989.79 (cinco mil novecientos ochenta y nueve pesos 79/100 M.N.)**.

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

A C U E R D A

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen **INE/CG1110/2018** y la Resolución **INE/CG1111/2018**, aprobados en sesión ordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, respecto de las irregularidades encontradas la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Jefe de Gobierno, Diputados Locales y Alcaldes, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la Ciudad de México en los términos precisados en los Considerandos **5** y **6** del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo.

TERCERO. Se instruye a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral que informe a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SCM-RAP-99/2018**, remitiéndole para ello las constancias atinentes.

CUARTO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México, a efecto de que procedan al cobro de las sanciones impuestas al partido político en el ámbito local, en términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las cuales se harán efectivas a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme cada una de ellas, de conformidad con lo establecido en el considerando respectivo de la presente Resolución.

QUINTO. Se instruye al Instituto Electoral de la Ciudad de México que en términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas con base en la capacidad económica estatal, sean destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables.

SEXTO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de las sanciones impuestas en el presente Acuerdo, en términos de lo dispuesto en el Artículo Transitorio PRIMERO del Acuerdo INE/CG61/2017.

SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Finalmente, el apartado de 9.38 en lo general, separando esta votación en lo general por lo que hace a la valoración de los datos recortados en el Sistema Integral de Fiscalización. _____
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si tienen a bien aprobar en lo general, el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en el orden del día como el apartado 9.38. _____

Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo general, sírvanse en manifestarlo. _____
Aprobado, por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello). _

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Ahora, someto a su consideración en lo particular, por lo que hace al Proyecto de Acuerdo 9.38 la forma de valoración de los datos reportados en el Sistema Integral de Fiscalización tal y como viene en el Proyecto. _____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. _____

9 votos. _____

¿En contra? _____

2 votos. _____

Aprobado, en lo particular por 9 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero Presidente. _____

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG1292/2018) Ptos. 9.38 _____

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO SCM-RAP-87/2018

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja, suscrito por María de la Luz Méndez Gutiérrez, en su carácter de Representante del Partido Pacto Social de Integración, ante el Consejo Municipal Electoral de San Gregorio Atzompa, del Instituto Electoral del Estado de Puebla, en contra del Partido Político Movimiento Ciudadano y del C. José Avelino Mario Merlo Zanella, entonces candidato a Presidente Municipal de San Gregorio Atzompa, estado de Puebla, en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Puebla; denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normativa electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos por presuntos gastos de campaña no reportados por concepto de contratación de grupo musical denominado “Sonora Dinamita”, alimentos, bebidas, alimentos, sillas de metal y de plástico, mesas, lonas, tablones, servicio de meseros, rotulado de bardas, adquisición de volantes, publicidad en redes sociales, arrendamiento de casa de campaña, playeras, lo anterior en beneficio de la campaña de los sujetos obligados denunciados.

II. Aprobación de Resolución. El seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria la Resolución identificada con el número **INE/CG886/2018**, que presentó la Comisión de Fiscalización del propio Instituto, sobre el procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Político Movimiento Ciudadano y del C. José Avelino Mario Merlo Zanella, entonces candidato a Presidente Municipal de San Gregorio Atzompa, estado de Puebla, en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Puebla.

III. El mismo seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión ordinaria la Resolución respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado **INE/CG1165/2018**, de los informes de Ingresos y Gastos de campaña a los cargos de Diputados Locales, Presidentes Municipales y Regidores, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Puebla.

IV. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución referida, el once de agosto de dos mil dieciocho, el Partido Pacto Social de Integración , interpuso el recurso de apelación para controvertir el Dictamen Consolidado **INE/CG1165/2018**, de los informes de Ingresos y Gastos de campaña a los cargos de Diputados Locales, Presidentes Municipales y Regidores, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Puebla, así como la Resolución numero **INE/CG886/2018**, dictada dentro del expediente de queja **INE-Q-COF-UTF/643/2018/PUE**. Mismo que fue radicado en la sala Regional Ciudad de México, con el número de expediente identificado con la clave **SCM-RAP-87/2018**, para los efectos legales correspondientes.

V. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Ciudad de México resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el seis de septiembre de dos mil dieciocho, determinando lo siguiente:

***“PRIMERO.** - Se **revoca** la resolución dictada dentro del expediente de queja INE-Q-COF-UTF-643/2018/PUE, aprobada mediante Acuerdo INE/CG886/2018, para los efectos precisados en este fallo.*

***SEGUNDO.** - Se **revoca parcialmente** el Dictamen Consolidado y la Resolución que lo aprobó INE/CG1165/2018, para los efectos precisados en este fallo.”*

Lo anterior, para el efecto de que este Consejo General, investigue si los conceptos de gasto especificados en el escrito de queja, en efecto, fueron reportados por los denunciados; en su caso, ordene al Oficial Electoral que corresponda la certificación de las paginas mencionadas en la queja; valore las pruebas ofrecidas por el recurrente en su escrito de queja a la luz de la información que obre en el SIF y su documentación soporte, incluido el contenido del “USB” a que se refiere el recurrente en su escrito de queja.

Así mismo este Consejo deberá fundar y motivar su determinación, ***analizando adecuadamente las pruebas a que se hace mención en el escrito de queja***, en su caso, **emitir una Resolución con base en la nueva valoración del acervo probatorio** y, de corroborarse que, los denunciados omitieron reportar alguno de los conceptos denunciados, se deberá **cuantificar el importe** para que se impacte en la parte correspondiente del Dictamen Consolidado relativa al ciudadano José Avelino Mario Merlo Zanella y en relación con la determinación de los topes de gastos de campaña de la persona mencionada.

VI. Derivado de lo anterior, la ejecutoria recaída al recurso de apelación SCM-RAP-87/2018, tuvo por efecto revocar la Resolución **INE/CG886/2018**, así como el Dictamen Consolidado **INE/CG1165/2018**, por esta vía se acata e interviene para los efectos ordenados por la Sala Regional Ciudad de México, por lo que con fundamento en los artículos 425; 427, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables; por lo que, la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de mérito.

VII. A fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se procedió a realizar las diligencias ordenadas por la autoridad jurisdiccional, con la finalidad de investigar nuevamente los conceptos de gastos especificados en el escrito de queja, observando a cabalidad las bases establecidas en las referidas ejecutorias, dichas diligencias a continuación se describen:

Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.

- a) El siete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/1275/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a la citada Dirección de Auditoría, informara sí al momento de respuesta del presente oficio existe reporte en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) de los gastos de campaña denunciados a través del escrito de queja.
- b) El diez de septiembre de dos mil dieciocho, la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, mediante oficio número

INE/UTF/DA/3181/2018, dio contestación al oficio descrito en el inciso anterior, manifestando lo que a continuación se expone:

“Sobre el particular, le informó que de la revisión realizada al SIF se determinó lo siguiente:

Concepto
<i>Playera naranja</i>
<i>Sombrillas</i>
<i>Vinilonas publicitarias</i>
<i>Rotulado de bardas</i>
<i>Volantes</i>
<i>Arrendamiento de casa de campaña</i>
<i>Banderas color naranja</i>

Por lo que corresponde a los conceptos señalados anteriormente se encuentran registrados en la contabilidad del candidato de conformidad con lo siguiente: ”

Concepto	No. de póliza
<i>Playera naranja</i>	<i>PN2/DR-8/19-06-18</i>
<i>Sombrillas</i>	<i>PN2/DR-13/19-06-18</i>
<i>Vinilonas publicitarias</i>	<i>PN1/EG-1/06-05-18</i>
<i>Rotulado de bardas</i>	<i>PN2/IG-1/06-06-18</i>
<i>Volantes</i>	<i>PN1/EG-7/11-05-18</i>
<i>Arrendamiento de casa de campaña</i>	<i>PN1/EG-9/16-05-18</i>
<i>Banderas color naranja</i>	<i>PN2/DR11/19-06-18</i>

Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral.

- a) El siete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/1276/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto que certificara la existencia de la propaganda electoral denunciada, consistente en un espectacular, contenido del mismo y el cumplimiento del ID-INE como lo determina el acuerdo INE/CG615/2017, así como todos aquellos elementos que se consideren trascendentes para la sustanciación de la queja.
- b) El diez de julio de dos mil dieciocho, la Oficialía Electoral la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, informo que la petición

había quedado radicada, asimismo informo que, derivado de la verificación y certificación de la existencia y contenido de los links señalados en la ejecutoria, se obtuvo que en la revisión realizada al perfil de Facebook del candidato únicamente se puede apreciar la foto del otrora candidato sin mayor información al respecto, sin que se determinaría la existencia de mayores elementos que debieran ser estudiados en el procedimiento que nos ocupa.

Razón y Constancia. El siete de julio del dos mil dieciocho se integró al expediente, la Razón y Constancia signada por el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización a efecto de hacer constar el contenido de la USB que el quejoso anexó a su escrito inicial.

C O N S I D E R A N D O

1. Competencia. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44 numeral 1, incisos j) y aa); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización.

2. Determinación del órgano jurisdiccional. Que el seis de septiembre de dos mil diecisiete, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar la Resolución identificada con el número de **INE/CG886/2018** dictada dentro del expediente de queja **INE/Q-COF-UTF/643/2018/PUE**, aprobada el seis de agosto del año en curso, para que efecto de que la autoridad responsable, investigue nuevamente si los conceptos de gasto especificados en el escrito de queja, en efecto, fueron reportados por los denunciados; en su caso, ordene al Oficial Electoral que corresponda la certificación de las paginas mencionadas en la queja; valore nuevamente las pruebas ofrecidas por el recurrente en su escrito de queja a la luz de la información que obre en el SIF y su documentación soporte, incluido el contenido del “USB” a que se refiere el recurrente en su escrito de queja. Así mismo ordena que la autoridad responsable deberá fundar y motivar su determinación, **analizando adecuadamente las pruebas a que se hace mención en el escrito de queja**, en su caso, **emitir una**

Resolución con base en la nueva valoración del acervo probatorio y, de corroborarse que, los denunciados omitieron reportar alguno de los conceptos denunciados, se deberá **cuantificar el importe** para que se impacte en la parte correspondiente del Dictamen Consolidado relativa al ciudadano José Avelino Mario Merlo Zanella y en relación con la determinación de los topes de gastos de campaña correspondiente.

3. Alcances del cumplimiento. Que por lo anterior y en de la Sentencia recaída al Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica **SCM-RAP-87/2018**, relativo al **estudio de fondo y efectos**, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó lo que a continuación se transcribe:

“1. Revocar la resolución dictada dentro del expediente de queja INE/Q-COF-UTF/643/2018/PUE, aprobada el seis de agosto del año en curso mediante Acuerdo INE/CG886/2018, para el efecto de que la autoridad responsable, investigue si los conceptos de gasto especificados en el escrito de queja, en efecto, fueron reportados por los denunciados; en su caso, ordene al Oficial Electoral que corresponda la certificación de las páginas mencionadas en la queja; valore las pruebas ofrecidas por el recurrente en su escrito de queja a la luz de la información que obre en el SIF y su documentación soporte, incluido el contenido del “USB” a que se refiere el recurrente en su escrito de queja.

De no admitir la diligencia de certificación referida a cargo de un Oficial Electoral, o de haber una imposibilidad para ello, entonces deberá fundar y motivar su determinación.

En consecuencia, se ordena al Consejo General analizar adecuadamente las pruebas a que se ha hecho mención, en su caso, emitir una resolución con base en la nueva valoración del acervo probatorio y, de corroborarse que, en efecto, los denunciados omitieron reportar alguno de los conceptos denunciados, cuantificar su importe a la luz de los parámetros establecidos en el Reglamento de Fiscalización para que se impacte en la parte correspondiente del Dictamen Consolidado y en relación con la determinación de los topes de gastos de campaña de la persona mencionada .

2. Revocar parcialmente el Dictamen consolidado INE/CG1165/2018 y la resolución que lo aprobó, en la parte relativa al ciudadano José Avelino Mario Merlo Zanella, en el rubro de “gastos no reportados”, así como la relativa a la

cantidad que se señala como total de gastos, los porcentajes de las erogaciones en relación con el tope de gastos de campaña.

Lo anterior, para el efecto de que se emita uno nuevo, en el que sea considerada la determinación que sea dictada en cumplimiento del numeral 1 que antecede, dentro del procedimiento administrativo sancionador iniciado a propósito de la queja presentada por el recurrente.”

4. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso el Recurso de Apelación identificado en el antecedente **IV** del presente Acuerdo.

5. Que de la lectura de la Sentencia recaída al medio de impugnación identificado con la clave alfanumérica **SCM-RAP-87/2018**, se desprende que la Sala Regional ordenó revocar la Resolución dictada dentro del expediente de queja **INE/Q-COF-UTF/643/2018/PUE**, aprobada el seis de agosto del año en curso mediante Acuerdo **INE/CG886/2018**, para el efecto de que la autoridad responsable, investigue si los conceptos de gasto especificados en el escrito de queja, en efecto, fueron reportados por los denunciados; en su caso, ordene al Oficial Electoral que corresponda la certificación de las páginas mencionadas en la queja; valore las pruebas ofrecidas por el recurrente en su escrito de queja a la luz de la información que obre en el SIF y su documentación soporte, incluido el contenido del “USB” a que se refiere el recurrente en su escrito de queja, así mismo ordena que la autoridad responsable deberá fundar y motivar su determinación, **analizando adecuadamente las pruebas a que se hace mención en el escrito de queja**, en su caso, **emitir una Resolución con base en la nueva valoración del acervo probatorio** y, de corroborarse que, los denunciados omitieron reportar alguno de los conceptos denunciados, se deberá **cuantificar el importe** para que se impacte en la parte correspondiente del Dictamen Consolidado relativa al ciudadano José Avelino Mario Merlo Zanella y en relación con la determinación de los topes de gastos de campaña correspondiente.

6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En consecuencia, este Consejo General modifica la **Resolución** número **INE/CG886/2018**, relativa al Procedimiento Administrativo Sancionador de queja en Materia de Fiscalización, instaurado en contra instaurado en contra del C. José

Avelino Mario Merlo Zanella, entonces candidato a Presidente Municipal de San Gregorio Atzompa, estado de Puebla y del Partido Político Movimiento Ciudadano, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla, identificado con el número de expediente **INE/Q-COF-UTF/643/2018/PUE**, por lo que hace a supuestos gastos no reportados durante el periodo de campaña, de esta forma, se procede a la modificación ordenada en los términos siguientes:

“(…)

2. Estudio de Fondo. (...)

...

Ahora bien, del antecedente normativo, se deduce que los partidos políticos tienen la obligación de reportar con veracidad y registrar contablemente sus egresos, debiendo soportar con documentación original este tipo de operaciones, es decir, que la documentación comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido político por la persona a quien se le efectuó el pago y prestó dichos servicios, especificando todos los gastos efectuados por los sujetos obligados.

Por lo anterior, y en cumplimiento de esta obligación, el órgano fiscalizador cuenta con la facultad de verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen. En relación al régimen de transparencia y rendición de cuentas, la autoridad fiscalizadora debe tomar en cuenta la presentación de la documentación comprobatoria que soporte la licitud de sus operaciones a efecto de que los partidos políticos cumplan con su obligación de reportar sus ingresos y egresos ante el aludido órgano fiscalizador, esto con la finalidad de brindar certeza plena respecto de los recursos recibidos por los partidos políticos, los cuales deberán aplicarse única y exclusivamente para sus propios fines constitucionales y legalmente permitidos.

En este orden de ideas, en atención a los hechos denunciados, esta autoridad electoral analizará los conceptos denunciados a efecto de realizar un pronunciamiento individualizado.

Omisión de reportar egresos por conceptos de equipo de sonido, grupo musical (Sonora Dinamita), playeras naranjas, sombrillas, renta de camioneta, publicidad en redes sociales, vinilonas publicitarias, rotulado de bardas,

volantes, arrendamiento de casa de casa de campaña, mesas, tablonés, servicio de meseros, banderas color naranja.

Por lo que hace a las pruebas aportadas por el quejoso con las cuales pretende acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de las actividades de campaña, no se desprenden los elementos mínimos que permitan determinar número de asistentes, los gastos de publicidad consistentes en equipo de sonido, grupo musical (Sonora Dinamita), playeras naranja, sombrillas, renta de camioneta, publicidad en redes sociales, vinilonas publicitarias, rotulado de bardas, volantes, arrendamiento de casa de casa de campaña, mesas, tablonés, servicio de meseros, banderas color naranja.

Documentales que se valoran de manera de manera concatenada ya que la mismas se refieren a los hechos denunciados; ahora bien, toda vez que el denunciante únicamente aportó pruebas técnicas, y que en las mismas no se pueden determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar aunado a que no aportó mayores pruebas que corroboraran los hechos denunciados; en consecuencia, resultan no ser suficientes para acreditar su dicho.

Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro **PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN**, cuyo contenido es del tenor siguiente:

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.-

De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún

otro elemento de prueba con el cual deben ser administradas, que las puedan perfeccionar o corroborar.

Esto último tiene relación con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 36/2014, de rubro **PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.**

Ahora bien, por lo que hace a la prueba identificada como una memoria USB que contiene a dicho del quejoso contiene un supuesto video de la presentación para el cierre de campaña del grupo “Sonora Dinamita”, contratado por el candidato denunciado. Se hace la precisión que como resultado de la Razón y Constancia de fecha siete de septiembre de dos mil dieciocho, se obtuvo que dicho dispositivo de almacenamiento únicamente contiene un archivo de la misma queja escaneada que fue presentada ante la Unidad Técnica de Fiscalización; sin que se encontrara ningún video como manifiesta el quejoso. Por lo anterior resulta ineficaz para acreditar los hechos denunciados, ya que el quejoso no aporta ningún elemento probatorio que asevere su denuncia más que su dicho, sin aportar a la autoridad fiscalizadora mayores elementos de convicción, ni circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitan ni siquiera de manera indiciaria a esta autoridad advertir la supuesta existencia de la participación del grupo musical “Sonora Dinamita”, en el evento de campaña del candidato incoado.

Por lo anterior se concluye que, por cuanto hace al supuesto gasto por concepto de contratación del grupo musical “Sonora Dinamita”, esta autoridad no cuenta con mayores elementos de prueba que vinculen el dicho del quejoso con un presunto beneficio a favor del entonces candidato y partido político denunciado o en su caso, circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitieran a esta autoridad determinar la existencia de conductas que vulneren disposiciones en materia de fiscalización; por lo que, del escrito de queja no se advierten mayores elementos de prueba que concatenados entre sí generaran convicción a esta autoridad en cuanto a los hechos que pudieran desprenderse de estas.

A mayor abundamiento, el simple pronunciamiento del denunciante no aporta indicio alguno que permita considerar una línea de investigación para determinar si existió un beneficio a la campaña C. José Avelino Mario Merlo Zanella, entonces candidato a Presidente Municipal de San Gregorio Atzompa, estado de Puebla y del Partido

Político Movimiento Ciudadano, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla.

Sirve para sustentar lo referido, lo señalado en la ***Jurisprudencia 4/2014 Coalición integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores vs. Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero:***

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.

*De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, **para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser administradas, que las puedan perfeccionar o corroborar.***

Quinta Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. [SUP-JRC-041/99](#).—Actor: Coalición integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores.—Autoridad responsable: Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.—30 de marzo de 1999.—Unanimidad de votos.—Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata.—Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías.

Juicio de revisión constitucional electoral. [SUP-JRC-050/2003](#).—Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de México.—30 de abril de 2003.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: José Luis de la Peza.—Secretario: Felipe de la Mata Pizaña.

Recurso de apelación. [SUP-RAP-64/2007](#) y acumulado.—Recurrentes: Partido Verde Ecologista de México y otro.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—21 de septiembre de 2007.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez.

Ahora bien, por lo que respecta a la propaganda electoral denunciada, la cual da origen, a la materia de estudio de la presente queja; esta autoridad, bajo el irrestricto apego al principio de exhaustividad; agotó todas las vías y medios posibles para allegarse de información que permitiera señalar con certeza si, en efecto existió una actividad de ilícita, y la posible actualización del no reporte del mismo, atribuible a los sujetos incoados. Al respecto, es de utilidad lo establecido por el Tribunal Electoral en la Jurisprudencia 43/2002, la cual es del tenor siguiente:

PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.-Las **autoridades electorales**, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, **están obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento** y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas etapas y la realización de los actos de que se compone el Proceso Electoral. De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



[Énfasis añadido]

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que a continuación se invoca:


“Registro No. 212832. Localización: Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. XIII, Abril de 1994. Página: 346. Tesis Aislada. Materia(s): Civil

En este sentido, la autoridad fiscalizadora, en atención al principio de exhaustividad, y en acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional en la Sentencia recaída al medio de impugnación identificado con la clave alfanumérica SCM-RAP-87/2018 al, la Dirección de Resoluciones y Normatividad, el día siete de septiembre de dos mil dieciocho, procedió a girar el oficio número INE/UTF/DRN/1275/2018, dirigido a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, con la finalidad de que remitiera la información y documentación soporte respecto al reporte y registro en el Sistema Integral de Fiscalización sobre el gasto realizado por el denunciado por concepto de equipo de sonido, playeras naranjas, sombrillas, renta de camioneta, publicidad en redes sociales, vinilonas publicitarias, rotulado de bardas, volantes, arrendamiento de casa de casa de campaña, mesas, tablonés, servicio de meseros, banderas color naranja, mismos que fueron denunciados.

Derivado de lo anterior, mediante oficio de fecha diez de septiembre del dos mil dieciocho, la citada Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros dio respuesta al requerimiento de información, señalando que se localizó el registro de los gastos por los conceptos denunciado, consistentes en: equipo de sonido, sombrillas, vinilonas, bardas, volantes, casa de campaña y banderas; mismos que se encuentran registrados y reportados en el Sistema Integral de Fiscalización en el **ID de Contabilidad 53816**, en las pólizas que se indican en el cuadro que a continuación se inserta, en dichas pólizas se localizó documentación soporte consistente en: contratos, cotizaciones, identificaciones de aportantes, permisos de pinta de bardas y de colocación de lonas, corrección de pólizas, pólizas de trípticos; así como muestras fotográficas aportadas como evidencia de la propaganda utilitaria denunciada (casa de campaña, sombrillas, banderas, playeras).

Concepto denunciado	Póliza registrada en el SIF ¹
Playera naranja	<p>PN2/DR-8/19-06-18 Concepto: Playeras Documentación: contrato, cotización, identificación de aportantes, muestras fotográficas</p> 
Sombrillas	<p>PN2/DR-13/19-06-18 Concepto: Sombrillas. Documentación: contrato, cotización, identificación de aportantes, muestras fotográficas</p> 
Vinilonas publicitarias	<p>PN1/EG-1/06-05-18 Documentación: contrato, cotización, identificación de aportantes, muestras fotográficas</p>
Rotulado de bardas	<p>PN2/IG-1/06-06-18 Documentación: contrato, cotización, identificación de aportantes, muestras fotográficas, permiso de pinta de bardas.</p>
Volantes	<p>PN1/EG-7/11-05-18 Documentación: contrato, cotización, identificación de aportantes, muestras fotográficas</p>

¹ Cabe señalar que se señalan en la tabla en la columna de Conceptos Denunciados, fueron registrados y reportados en el Sistema de Integral de Fiscalización, por el candidato denunciado en su informe de campaña correspondiente, en consecuencia, éstos, fueron materia de estudio, análisis y pronunciamiento en el Dictamen Consolidado <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98055/CGex201808-6-dp-3-19.pdf> y la Resolución INE/CG1166/2018, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Concepto denunciado	Póliza registrada en el SIF ¹
	
Arrendamiento de casa de campaña	PN1/EG-9/16-05-18 Documentación: contrato, cotización, identificación de aportantes, muestras fotográficas.
Banderas color naranja	PN2/DR11/19-06-18 Documentación: contrato, cotización, identificación de aportantes, muestras fotográficas.

En este mismo orden de ideas y en cumplimiento al principio de exhaustividad con el que actúa esta autoridad electoral, procedió a hacer una revisión a los registros del Sistema Integral de Fiscalización, arrojando los resultados del cuadro anterior. Lo que pone en evidencia en forma ineludible, que los documentos que obran en el expediente en el que se actúa concuerdan con lo registrado en el Sistema Integral de Fiscalización, esto, de conformidad con lo asentado en la Razón y Constancia emitida por el Titular de la unidad Técnica de Fiscalización de documental que crea certeza de que dichos documentales validados por el servidor público crean plena convicción de la certeza de las mismas. Sirve de apoyo la siguiente tesis:

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS. PRINCIPIOS DE. Los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, consagrados en el artículo 209 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, obligan al juzgador a decidir las controversias planteadas y contestaciones formuladas, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubiesen sido materia del debate; en esas condiciones, si la responsable dicta una resolución tomando en cuenta sólo de manera parcial la demanda y contestación formuladas, tal sentencia no es precisa ni congruente y por tanto, viola las garantías individuales del peticionario.”
[Énfasis añadido]

Es aplicable por analogía, la tesis VI.T.29 L, contenida en la página 1202, del Tomo XII, Agosto de 2000, en Materia Laboral, sostenida por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que expresa:

” INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. INCLUYE TODAS LAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DEL JUICIO LABORAL. Si el actor ofrece, entre otras pruebas, la instrumental de actuaciones, en términos de lo dispuesto en el artículo 836 de la Ley Federal del Trabajo, la Junta está obligada a tomar en cuenta todas las actuaciones que obran en el expediente natural, incluyendo la contestación a la demanda en su integridad, por lo que, al no haberlo hecho así, infringe en perjuicio del trabajador la garantía de legalidad prevista en el artículo 14 constitucional.”

Por lo que hace a los conceptos restantes consistentes en: renta de camioneta, publicidad en redes sociales, mesas, tablonés, servicio de meseros se hace referencia que ésta autoridad electoral no cuenta con elementos de convicción que hagan verosímil. Lo anterior, toda vez que el denunciante se limitó a ofrecer pruebas técnicas, de cuyo análisis y estudio, no es posible determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los supuestos hechos y conceptos denunciados, ni que éstos tengan un vínculo o relación con los denunciados, ni mucho menos que los mismos hayan significado un beneficio a la campaña del entonces candidato a Presidente Municipal incoado, ya que de los elementos aportados no se desprenden los elementos mínimos que permitan determinar la existencia de equipo de sonido, grupo musical (Sonora Dinamita), como ya se refirió párrafos arriba, así como tampoco la existencia de renta de camiones, mesas, tablonés así como tampoco de un supuesto servicio de meseros, por lo que esta autoridad no cuenta con mayores elementos de prueba que vinculen el contenido de las mismas con un presunto beneficio a favor del entonces candidato y partido político denunciado o en su caso, circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitieran a esta autoridad determinar la existencia de conductas que vulneren disposiciones en materia de fiscalización; por lo que, del escrito de queja no se advierten mayores elementos de prueba que concatenados entre sí generaran convicción a esta autoridad en cuanto a los hechos que pudieran desprenderse de estas.

Aunado a lo anterior, es de resaltarse que en el escrito de queja el denunciante únicamente hace referencia al “perfil de Facebook” del denunciado, resultado de la certificación que realizó Oficialía Electoral no se desprenden elementos que permitan establecer las circunstancias mínimas de la realización de los eventos que menciona, por lo tanto, dicha probanza carece de los requisitos para su valoración. Al respecto se invoca la tesis I.3o.C.665 C, página 2370, del Tomo XXVII, Febrero

de 2008, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es el siguiente:

“PRUEBAS. EL VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS IMPLICA LA SATISFACCIÓN DE LOS REQUISITOS FORMALES QUE ESTABLECE LA LEY, MIENTRAS SU ALCANCE SE REFIERE AL ANÁLISIS QUE DE ELLAS REALIZA EL JUZGADOR EN ATENCIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA. El análisis de las probanzas en un proceso por parte del juzgador, atiende a dos momentos: el formal y el de fondo. El aspecto formal atiende a los requisitos legales que debe cumplir un medio probatorio a efecto de que se le pueda otorgar un valor determinado, el cual se encuentra precedido por las etapas de ofrecimiento, admisión, preparación (en caso de que su constitución sea en el proceso) y desahogo del medio de convicción respectivo. Una vez superado el aspecto formal, el juzgador atiende al aspecto de fondo, en el que determina, a través de las reglas de la sana crítica, si la probanza en cuestión tiene relación con los hechos alegados por su oferente. Asimismo, cada una de las etapas antes descritas obedece a periodos procesales diversos en la conformación de una prueba, esto es, la admisión de una prueba sólo atiende a la manera en que la misma fue ofrecida, pero no puede garantizar su debida preparación, asimismo, esta última circunstancia no presupone que su desahogo sea conforme a derecho y, por último, que de haberse cumplido con todas las etapas formales de la prueba ésta, indefectiblemente, deba causar plena convicción en el juzgador en relación con el hecho a demostrar. De lo anterior se evidencia que aun y cuando en la práctica existe una tendencia a confundir valor y alcance probatorio, dichos conceptos no son equivalentes, ya que, se reitera, mientras que el primero atiende a que se hubieran reunido los requisitos de forma, este último es totalmente independiente ya que se aleja de los requisitos formales que impone la ley y descansa en la sana crítica del juzgador.”

Del nuevo análisis y estudio realizado por esta autoridad electoral, se desprende que no se acredita, infracción alguna en materia de fiscalización por parte **C. José Avelino Mario Merlo Zanella**, entonces candidato a Presidente Municipal de San Gregorio Atzompa, estado de Puebla, así como del partido que lo postuló, **Movimiento Ciudadano** toda vez que los conceptos de gasto de campaña denunciados en el escrito de queja, se encuentra registrados y reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, en virtud de lo anterior, se concluye que los sujetos incoados no incumplieron con lo establecido en artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I, II y III de la Ley General de Partidos Políticos, 243, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el 127, numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización, por lo que debe declararse **infundado** el procedimiento de mérito por lo que hace al presente apartado.

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

A C U E R D A

PRIMERO. Se modifica la parte conducente de la Resolución **INE/CG886/2018**, aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, relativa al procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Movimiento Ciudadano, y su entonces candidato a Presidente Municipal de San Gregorio Atzompa, estado de Puebla, el C. José Avelino Mario Merlo Zanella, identificado como **INE/Q-COF-UTF/643/2018/PUE**, en los términos precisados en los Considerandos 5 y 6 del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de México, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente SCM-RAP-87/2018, remitiéndole para ello las constancias atinentes.

TERCERO. Notifíquese a los interesados.

CUARTO. En términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación los recursos que proceden en contra de la presente determinación son los denominados “recurso de apelación” y “juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano”, según sea el caso, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Ahora corresponde el análisis, discusión y votación en lo específico de los Proyectos de Acuerdo que fueron reservados y que no han sido sometidos a votación, el primero de ellos es el apartado 9.1. _____

Tiene el uso de la palabra en primera instancia a la Consejera Electoral Pamela San Martín que es quien lo ha reservado. _____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente. _____

El apartado 9.1 como señalaba al igual que otro de los Proyectos de Acuerdos que se analizarán más adelante, tiene una particularidad, no ha sido conocido, ni resuelto por este Consejo General porque de hecho el acatamiento es para que se sometiera a consideración del Consejo General, se concluyera la investigación y se sometiera a consideración del Consejo General, precisamente por eso el análisis, digamos, es por primera ocasión por parte de este Consejo General. _____

No acompañaré el sentido del Proyecto de Acuerdo por varias razones, en primer lugar, me parece que hay una cuestión que es importante tomar en cuenta, hay un conjunto de pruebas que presenta el quejoso y se considera que son pruebas técnicas y por lo tanto, no se toman en cuenta porque provienen de redes sociales, los gastos no se toman en consideración porque la forma de acreditarlos es imágenes que están en redes sociales, el detalle es, y como lo hemos discutido en distintas ocasiones que las redes sociales son del propio quejoso, del propio denunciado, es decir, es la página del denunciado donde el denunciado señala que estuvo en un evento o realizó una actividad, carga fotografías de ese evento y en el mismo hay gastos que se pueden observar sin

embargo, los mismos no se contabilizan porque provienen de redes sociales al considerarlo como una prueba técnica. _____

Me parece que esa no debe de ser la valoración que se realice en torno a las redes sociales. _____

Por otra parte, se denuncian 130 videos, se le pide a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos que nos informe si estos 130 videos tienen gastos asociados a la producción, a la posproducción, etcétera y lo que la Dirección Ejecutiva nos contesta es que de estos 130 videos, 92 tienen gastos de producción y de posproducción, sin embargo, para efectos de la cuantificación solamente se empiezan a valorar 69 de estos 92 videos porque solamente se toman los que tienen producción, no los que tienen posproducción, y entonces no se contabiliza, y no se asocia algún gasto a la posproducción, cuestión que no necesariamente es una cuestión que implica pocos gastos, los gastos de posproducción pueden ser gastos bastante altos y que no están siendo contemplados para contabilizarlos. _____

Después, se depura nuevamente, y llega a sancionarse 47 videos. Entiendo el paso entre los 69 y los 47, porque aquí lo que se analiza es que en algunos casos es un video que salió, por ejemplo, de un noticiero, entonces, sí tiene costos asociados a la producción, pero no son costos imputables al candidato. Y tal vez tiene un cintillo al final, pero puedo entender que es una cuestión que no trae un gasto asociado. _____

Sin embargo, lo que me parece que no se explica y no se justifica, es de los 92 que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos nos señala que tiene producción y posproducción, solamente realizar el análisis respecto de 69 de ellos. _____

Esto me parece que no se justifica en el Proyecto de Acuerdo, y no nos permite llegar a una contabilización adecuada. _____

Por otra parte, se denuncia el uso de un hashtag, y lo que nos dicen en el Proyecto de Acuerdo es que el hashtag en sí mismo no tiene un costo, y en eso le doy la razón a la Unidad Técnica de Fiscalización; el hashtag como tal no tiene un costo asociado, sin embargo, me parece que lo que procedía en la investigación era verificar si el hashtag había sido promocionado, porque lo que sí trae un gasto asociado es la promoción de un hashtag, precisamente, para tener más visualizaciones. Esto no consta en el Proyecto de Acuerdo. _____

Finalmente, me parece que se comete un error, y esto es una discusión que ya hemos tenido, cuando se analizan los gastos que se encuentran reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, lo que se busca es que los conceptos se empaten, pero no que haya una entidad entre el gasto específico y aquel evento o aquel acto en el que ese gasto se llevó a cabo _____

Por lo que, igual ocurre con el CARDEX, 10 balones sirven para cualquier cantidad de eventos, siempre y cuando en un solo evento no hayan más 10 balones. Y esto, lo que hace es no poder medir las características de los gastos que se han efectuado. _____

Además, aquí no advierto que exista un cruce de la propaganda utilitaria con los CARDEX, y en algunos de los acatamientos que tenemos el día de hoy, el Tribunal Electoral expresamente nos señala que si estamos identificando gastos, y tenemos en el Reglamento de Fiscalización elementos para asociar el gasto a un evento específico, que tenemos que hacer, echar mano a esa información con la que contamos en el Sistema Integral de Fiscalización, no lo tenemos en este caso. _____

Y, por último, no comparto ni la matriz de precios que se está empleando, porque, nuevamente, es una matriz de precios depurada, y eso no es lo que establece el Reglamento de Fiscalización, ni los criterios de sanción que se

están empleando, puesto que el gasto no reportado se está sancionando al 100 por ciento en lugar del 150 por ciento. _____

Y la reducción de ministraciones va al 25 por ciento de la administración mensual, y no al 50 por ciento como era la sanción que originalmente imponía este Consejo General. _____

Por lo tanto, no podría acompañar el Proyecto de Acuerdo en los términos que lo propone a la Unidad Técnica de Fiscalización. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral, Alejandra Pamela. _____

Secretario del Consejo, por favor tome la votación respectiva. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 9.1. _____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. _____

8 votos. _____

¿En contra? _____

2 votos. _____

Aprobado por 8 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, no estando presente durante la votación la Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas), Consejero Presidente. _____

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG1293/2018) Ptos. 9.1 _____

INE/CG1293/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN CUMPLIMIENTO AL SM-RAP-80/2018 DICTADO POR LA SALA REGIONAL DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRPCIÓN DE TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CON SEDE EN MONTERREY SE EMITE RESPECTO AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, PRESENTADO POR EL C. JOSÉ JUAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y SU ENTONCES CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, EL C. FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ, IDENTIFICADA COMO INE/Q-COF-UTF/664/2018/NL

VISTO para resolver el expediente número **INE/Q-COF-UTF/664/2018/NL** integrado por los hechos que se consideran constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos.

A N T E C E D E N T E S

I. Escrito de queja presentado por el C. José Juan Hernández Hernández. El veinticinco de julio de dos mil dieciocho se recibió en la Unidad Técnica de fiscalización el escrito INE/JLE/NL/UTF-EF/458/2018 signado por el Maestro Pablo Jasso Eguía en su carácter de enlace de fiscalización de la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León, mediante el cual remite constancias del escrito de queja presentado por José Juan Hernández Hernández, representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Nuevo León en contra del Partido Acción Nacional y su entonces candidato a presidente Municipal de Monterrey, el **C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez**, denunciando hechos que considera podrían constituir la omisión de reportar ingresos y egresos que en su conjunto pudieran constituir un rebase a los topes de gasto de campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León.(Fojas 1 a la 275 del expediente)

II. Hechos y asuntos denunciados. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios técnicos ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja:

“HECHOS

“(…)

1. El seis de noviembre de dos mil diecisiete inició el Proceso Electoral en el estado de Nuevo León.

2. Con fecha treinta y uno de octubre el Consejo General de la Comisión Estatal de Nuevo León, dictó el Acuerdo identificado con la clave CEE/CG149/2017, por medio del cual determinó como tope de gasto de campaña para la elección del Ayuntamiento de Monterrey la cantidad de \$8,410,871.90 (ocho millones cuatrocientos diez mil ochocientos setenta y un pesos 90/1 00 M.N.).

3. El período de precampañas transcurrió del tres de enero al once de febrero del año en curso.

4. El día veintinueve de abril del presente año inició el período de campaña para la elección del Municipio de Monterrey y culminó el veintisiete de junio del año en curso.

5.- Felipe de Jesús Cantú Rodríguez es candidato a Presidente Municipal de Monterrey, postulado por la Partido Acción Nacional.

*6. Mediante información pública del Sistema Integra de Fiscalización, visible en la página <http://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle-general-candidato>, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, reportó un gasto de campaña que asciende a la cantidad de **\$6,078,830.97** (seis millones setenta y ocho mil ochocientos treinta pesos 97/100 M.N.), tal como se puede apreciar en la siguiente imagen:*

[Se insertan Imágenes¹]

¹ Las imágenes y cuadros que contienen las ligas denunciadas, se encuentran en el Anexo 1 que forma parte integral de la presente resolución.

7. Sin embargo, de un monitoreo exhaustivo a sus redes sociales y otros medios informativos, por los cuáles se puede detectar el gasto erogado por el citado candidato, dicho reporte no corresponde con la realidad y presumiblemente existen gastos no reportados que deben sumarse a su tope de gastos y que como se analizará en el siguiente capítulo, de la suma de todos ellos, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, presumiblemente rebasó el tope de gastos de campaña en un 14.06% (catorce punto cero seis por ciento).

(...)

GASTOS NO REPORTADOS Y DETECTADOS MEDIANTE UN EJERCICIO DE MONITOREO A REDES SOCIALES Y DIVERSOS MEDIOS IMPRESOS.

1. Gasto no reportado de propaganda utilitaria.

PROPAGANDA UTILITARIA:

Se presume que el candidato omite reportar gasto por diverso concepto en aproximadamente **\$262,000.00 (doscientos sesenta y dos mil pesos)**, siendo estos los que más se visualizan en sus eventos:

1. Playera tipo polo color azul de Felipe.
2. Playera tipo polo color negro de Felipe.
3. Sombrilla color azul y blanco.
4. Bolsa ecológica color blanco "Felipe", con Asa.
5. Bolsa ecológica color azul "Felipe", con Asa.
6. Bolsa ecológica con suaje, plana color azul Felipe".
7. Bolsa ecológica blanca con letras color rojo, con Asa.
8. Gorra color rosa con blanco "Anaya".
9. Bandera color naranja del PAN.

(...)

2. Gastos operativos de campaña no reportados.

En el informe que el candidato Felipe de Jesús Cantú presenta ante el Instituto Nacional Electoral se puede observar que no reporta gasto por concepto de eventos, sin embargo, del seguimiento a sus redes sociales se observan 43 eventos que sí ameritan gasto y de los cuales se estima pueden ascender a la cantidad de \$1,226,643.35 (un millón doscientos veintiséis mil seiscientos cuarenta y tres pesos 35/100 m.n.).

Pero del seguimiento se observa que no reportó gastos por gasolina y de este rubro se presume un gasto no reportado aproximado de \$90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 m.n.) por los dos meses de campaña.

El total del monto del gasto omitido hace un total de \$1,436,643.35 (un millón cuatrocientos treinta y seis mil seiscientos cuarenta y tres pesos 35/100 m.n.)

(...)

3. Gastos no reportados de App.

APP “El Dx Ciudadano”, de Felipe de Jesús Cantú.

Se identifica que el candidato debió haber reportado gasto por concepto de gasto el costo de la aplicación (APP) “El Dx Ciudadano”. Una plataforma que, de acuerdo con el propio denunciado, permite identificar situaciones de riesgo para la seguridad y fallas en los servicios públicos en tiempo real.

Al respecto cabe señalar, primigeniamente, que dicho gasto debe ser considerado sin objeto partidista, dado que la plataforma misma que no tiene finalidad de dar a conocer propuestas de campaña, sino que se trata de una aplicación que desde el periodo de campaña tuvo como objetivo acumular información de para fines de políticas públicas, por ende no corresponde a la finalidad de la propaganda electoral.

(...)

Se considera que para el desarrollo de una aplicación de esta magnitud es necesario haber asignado un presupuesto aproximado de \$900,000.00 (novecientos mil pesos 00/100 m.n.)

(...)

4. Gastos no reportados de producción, edición y seguimiento en campaña.

Respecto del rubro de propaganda en internet se puede observar que la actividad de las redes sociales del candidato reflejan: Manejo de Redes, edición, producción, musicalización de videos; diseño de flayer digital y fotografía; así como diseño de imágenes; lo que implica un gasto considerable en el manejo de la promoción de su imagen, la cual se puede localizar en Facebook, Twitter e Instagram, concentrándose la mayor parte de la información en Facebook.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/664/2018/NL

De lo antes descrito se puede hacer la clasificación siguiente:

CONSEC	TIPO DE VIDEO	CANTIDAD	COSTO APROXIMADO	COSTO TOTAL
1	Edición	27	2,800.00	75,600.00
1	Edición y producción	61	2,800.00	170,800.00
1	Edición, producción y musicalización	2	5,000	10,000.00
1	Producción de Spot	37	11,700.00	432,900.00
2	Video Margarita Zavala	1	11,700.00	11,700.00
3	Jingle	2	7,500.00	15,000.00
				\$716,000.00

Sumado a lo anterior, no se conoce el gasto que el candidato pudo haber pagado como compra de publicidad en Facebook y Twitter.

(...)"

Elementos probatorios aportados que obran en el expediente.

- a) Constan de un balance de gastos del entonces candidato realizado por la parte quejosa.
- b) Constan de compendio de pruebas técnicas impresas integradas en ciento ochenta y tres archivos digitalizados que contienen fotografías y videos en donde se relacionan diversos conceptos de gastos de los siguientes links:

No.	Liga de internet	Medio
1	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1873142086063612/	Facebook
2	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1872607856117035/	Facebook
3	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1872636739447480/	Facebook
4	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1873203456057475/	Facebook
5	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1874492305928590/	Facebook
6	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1874550309256123/	Facebook

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/664/2018/NL

No.	Liga de internet	Medio
7	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1875255279185626/	Facebook
8	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1875553772489110/	Facebook
9	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1876332642411223/	Facebook
10	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1877452912299196/	Facebook
11	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1877687782275709/	Facebook
12	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1877772328933921/	Facebook
13	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1878595202184967/	Facebook
14	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1878897485488072/	Facebook
15	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1879559388755215/	Facebook
16	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1879599062084581/	Facebook
17	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1879606698750484/	Facebook
18	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1879852475392573/	Facebook
19	https://www.facebook.com/felipedeiesuscantu/videos/1879887158722438/	Facebook
20	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1880128078698346/	Facebook
21	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1880870645290756/	Facebook
22	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1873208632723624/	Facebook
23	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1881223478588806/	Facebook
24	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1881225218588632/	Facebook
25	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1881908675186953/	Facebook
26	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1882002881844199/	Facebook
27	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1882053781839109/	Facebook
28	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1882737915104029/	Facebook
29	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1882772628433891/	Facebook
30	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1882697441774743/	Facebook
31	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1883833244994496/	Facebook
32	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1883700081674479/	Facebook
33	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1883921921652295/	Facebook

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/664/2018/NL

No.	Liga de internet	Medio
34	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1884733261571161/	Facebook
35	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1884990724878748/	Facebook
36	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1885790931465394/	Facebook
37	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1885900334787787/	Facebook
38	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1885068811537606/	Facebook
39	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1886012084776612/	Facebook
40	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1885073414870479/	Facebook
41	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1888265307884623/	Facebook
42	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1889824371062050/	Facebook
43	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1889884674389353/	Facebook
44	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1890255781018909/	Facebook
45	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1890257377685416/	Facebook
46	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1888292761215211/	Facebook
47	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1890974910946996/	Facebook
48	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1891236890920798/	Facebook
49	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1888296311214856/	Facebook
50	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1892082620836225/	Facebook
51	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1892112084166612/	Facebook
52	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1893116764066144/	Facebook
53	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1888300434547777/	Facebook
54	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1894262783951542/	Facebook
55	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1888305737880580/	Facebook
56	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1896299217081232/	Facebook
57	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1896315553746265/	Facebook
58	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1896928950351592/	Facebook
59	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1897256150318872/	Facebook
60	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1896169673760853/	Facebook

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/664/2018/NL

No.	Liga de internet	Medio
61	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1898107860233701/	Facebook
62	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1898109610233526/	Facebook
63	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1898930980151389/	Facebook
64	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1899040220140465/	Facebook
65	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1898118826899271/	Facebook
66	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1899334696777684/	Facebook
67	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1901195449924942/	Facebook
68	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1901204799924007/	Facebook
69	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1901048076606346/	Facebook
70	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1903010686410085/	Facebook
71	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1903067176404436/	Facebook
72	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1903080029736484/	Facebook
73	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1902444566466697/	Facebook
74	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1904350616276092/	Facebook
75	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1904344782943342/	Facebook
76	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1905653466145807/	Facebook
77	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1907898292587991/	Facebook
78	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1908000569244430/	Facebook
79	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1908176649226822/	Facebook
80	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1908178995893254/	Facebook
81	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1910185979025889/	Facebook
82	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1910322332345587/	Facebook
83	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1910323879012099/	Facebook
84	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1911894122188408/	Facebook
85	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1914859571891863/	Facebook
86	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1916044278440059/	Facebook
87	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1916794648365022/	Facebook

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/664/2018/NL

No.	Liga de internet	Medio
88	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1917224551655365/	Facebook
89	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1919131281464692/	Facebook
90	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1919425264768627/	Facebook
91	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1920849224626231/	Facebook
92	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1920853784625775/	Facebook
93	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1920945857949901/	Facebook
94	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1924029900974830/	Facebook
95	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1920948554616298/	Facebook
96	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1920951674615986/	Facebook
97	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1920958457948641/	Facebook
98	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1920963684614785/	Facebook
99	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1930118397032647/	Facebook
100	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1931741686870318/	Facebook
101	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1933108406733646/	Facebook
102	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1931930280184792/	Facebook
103	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1935000696544417/	Facebook
104	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1936641963046957/	Facebook
105	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1931938663517287/	Facebook
106	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1934981903212963/	Facebook
107	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1938973352813818/	Facebook
108	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1934987976545689/	Facebook
109	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1939729819404838/	Facebook
110	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1940653049312515/	Facebook
111	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1940657079312112/	Facebook
112	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1940659092645244/	Facebook
113	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1966968410014312/	Facebook
114	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1940674782643675/	Facebook

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/664/2018/NL

No.	Liga de internet	Medio
115	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1940795969298223/	Facebook
116	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1940682005976286/	Facebook
117	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1940801245964362/	Facebook
118	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1940684585976028/	Facebook
119	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1940691539308666/	Facebook
120	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1940693462641807/	Facebook
121	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1940696695974817/	Facebook
122	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1940697965974690/	Facebook
123	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1940702119307608/	Facebook
124	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1933413103369843/	Facebook
125	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1934992779878542/	Facebook
126	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1942994862411667/	Facebook
127	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1943374492373704/	Facebook
128	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1930799816964505?UzpfSTUwMzE2MTAyNToxMDE1NTkyMzklNjc3MTAyNg	Facebook
129	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1920853784625775/	Facebook
130	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1894262783951542/	Facebook
131	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1874473175930503/1874471579263996/?type=3&theater	Facebook
132	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1874669152577572/1874649709246183/?type=3&theater	Facebook
133	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1881664681878019/1881664435211377/?type=3&theater	Facebook
134	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1882938738417280/1882938475083973/?type=3&theater	Facebook
135	https://www.facebook.com/martinlopezmexico/photos/pcb.1881788568554123/1881788185220828/?type=3&theater	Facebook
136	https://twitter.com/AnniaGomezNL/status/994632334191161344	Twitter
137	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1893166110727876/1893162947394859/?type=3&theater	Facebook

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/664/2018/NL

No.	Liga de internet	Medio
138	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1898356533542167/1898355046875649/?type=3&theater	Facebook
139	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1899164753461345/1899155766795577/?type=3&theater	Facebook
140	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1900196736691480/1900196380024849/?type=3&theater	Facebook
141	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1902175749826912/1902170903160730/?type=3&theater	Facebook
142	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1902143866496767/1902138833163937/?type=3&theater	Facebook
143	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1906161686094985/1906158496095304/?type=3&theater	Facebook
144	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1912526432125177/1912516645459489/?type=3&theater	Facebook
145	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1912635735447580/1912609002116920/?type=3&theater	Facebook
146	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1914808548563632/1914729581904862/?type=3&theater	Facebook
147	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/a.606860046025162.1073741826.606850499359450/1909670715744082/?type=3&theater	Facebook
148	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1919405768103910/1919398854771268/?type=3&theater	Facebook
149	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1919390074772146/	Facebook
150	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1919135194797634/1919073911470429/?type=3&theater	Facebook
151	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2427919087233757&set=p.2427919087233757&type=3&theater	Facebook
152	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1929841780393642/1929836240394196/?type=3&theater	Facebook
153	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1920515861326234/1920501284661025/?type=3&theater	Facebook
154	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/a.606860046025162.1073741826.606850499359450/1920955804615573/?type=3&theater	Facebook

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/664/2018/NL

No.	Liga de internet	Medio
155	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1931264290251391/1931259090251911/?type=3&theater	Facebook
156	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1931271203584033/1931265476917939/?type=3&theater	Facebook
157	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1933277070050113/1933271000050720/?type=3&theater	Facebook
158	https://twitter.com/LaRedPuntoCom/status/1009880164266860544	Twitter
159	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1935000696544417/?type=3&theater	Facebook
160	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1934812306563256/	Facebook
161	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1933277070050113/1933271000050720/?type=3&theater	Facebook
162	https://twitter.com/postamx/status/1011731933095776265	Twitter
163	https://twitter.com/FelipeCantuR/status/1010554755406589958	Twitter
164	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/a.606860046025162.1073741826.606850499359450/1934979343213219/?type=3&theater	Facebook
165	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1936175999760220/1936149576429529/?type=3&theater	Facebook
166	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/a.606860046025162.1073741826.606850499359450/1930227003688453/?tpe=3&theater	Facebook
167	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1937828882928265/1937815416262945/?type=3&theater	Facebook
168	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1941023442608809/1941017939276026/?type=3&theater	Facebook
169	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1941023442608809/1941017939276026/?type=3&theater	Facebook
170	https://twitter.com/AhoraNoticiasMX/status/1011499559611138048	Twitter
171	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1943083912402762/1943039512407202/?type=3&theater	Facebook
172	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1943376309040189/	Facebook
173	https://www.posta.com.mx/nuevo-leon/presenta-felipe-app-para-ubicardelitos-y-malos-servicios	Línea de internet

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/664/2018/NL

No.	Liga de internet	Medio
174	https://www.abcnoticias.mx/presenta-felipe-nueva-app-de-quejaciudadana/106633	Línea de internet
175	https://www.instagram.comfp/BjH5aVQhFd9/?hl=es-la&takenby=fellpecantur	Instagram
176	https://www.youtube.com/watch?v=Y3u3XZQTU0w	Youtube
177	https://www.instagram.com/p/BkqX55sF9jp/?hl=es-la&takenby=felipecantur	Instagram
178	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.19106939923108421/1910689508975536/?type=3&theater	Facebook
179	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1910693992308421/1910690118975475/?type=3&theater	Facebook
180	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=922222084603700&set=a.130876923738224.28358.100004477501197&type=3&theater	Facebook
181	https://scontent.fmex3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35805520_1929815460396274_1088880681775267840_o.jpg?nc_cat=0&nc_eui2=AeHNGog7D-YMsyDpRMVfUkwcsOyGrRXUbV8FZqhFmPKdnB9aMv-NBIMqo8UD3DfhUyS9Xb2g8S7XJKcAoNtOHMgBkE6rKJZi5157cJuld3Aw&oh=8cb5067c47d684088b80ee750Sfeoa4d&oe5BD9DE28	Línea de internet
182	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/a.606860046025162.1073741826.606850499359450/1929836237060863/?type=3&theater	Facebook
183	https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/a.606860046025162.1073741826.606850499359450/1930225923688561/?type=3&theater	Facebook

c) Constan de un compendio de pruebas técnicas impresas que contienen diversas ligas de videos de la red social Facebook e imágenes de Twitter e Instagram, que corresponden a actos de campaña del entonces candidato.

d) Constan de una Sentencia que declara Existente la comisión de actos anticipados de campaña atribuidos a Felipe de Jesús Cantú Rodríguez.

III. Acuerdo de inicio de procedimiento de queja. El veintisiete de julio de dos mil dieciocho se acordó, integrar el expediente de mérito, asignar el número de expediente **INE/Q-COF-UTF/664/2018/NL**, registrarlo en el libro de gobierno, admitir la queja para su trámite y sustanciación, notificar su recepción al Secretario del Consejo General y al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, así como a los sujetos incoados (Foja 276 del expediente).

IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio de procedimiento de queja.

a) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, esta autoridad fijó en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 278 del expediente)

b) El dos de agosto de dos mil dieciocho se retiraron del lugar que ocupan en este Instituto los estrados de esta autoridad, el citado acuerdo de inicio, la cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 279 del expediente).

V. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintisiete de julio de dos mil dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/41014/2018 esta autoridad informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 280 del expediente).

VI. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización. El veintisiete de julio de dos mil dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/41015/2018 esta autoridad informó al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 281 del expediente).

VII. Notificación de inicio de procedimiento de queja al C. Emilio Suarez Licona Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

El veintisiete de julio de dos mil dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/41017/2018 esta autoridad notificó al Lic. Emilio Suarez Licona Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante este Consejo General, el inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 282 del expediente).

VIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez candidato postulado por el Partido Acción Nacional a Presidente Municipal en Monterrey, Nuevo León.

a) El diez de agosto de dos mil dieciocho mediante Acuerdo el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León de este Instituto notificará el inicio del procedimiento de la queja de mérito, asimismo emplazará al C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez candidato postulado a

Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, para que expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y en su caso exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones, y que presentase las aclaraciones que a su derecho correspondieran. (Fojas 448 a la 449 del expediente).

Dicha solicitud se ejecutó con fecha quince de agosto de dos mil dieciocho mediante oficio con alfanumérico INE/VE/JLE/NL1327/2018, signado por el Vocal Ejecutivo de la décima Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Nuevo León.

b) Al momento de elaboración de la presente Resolución no se contaba con la respuesta del incoado.

IX. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al Lic. Eduardo Ismael Aguilar Sierra Representante Propietario del Partido Acción Nacional.

El veintisiete de julio de dos mil dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/41016/2018 esta autoridad notificó al Lic. Eduardo Ismael Aguilar Sierra Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante este Consejo General, el inicio del procedimiento de mérito, corriéndole traslado con los elementos integradores del expediente, a fin de emplazarle para que en el plazo improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que recibió el oficio de mérito contestara por escrito lo que considerara pertinente y proveyera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 283 a la 284 del expediente).

b) El cinco de agosto de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de respuesta signado por el Lic. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante este Consejo General, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe en su parte conducente: (Fojas 285 a la 447 del expediente).

“(…)

A LOS HECHOS

(…)

A fin de redargüir lo aseverado por el quejicoso en su numeral SÉPTIMO, así como en sus “CONSIDERACIONES DE DERECHO”, y al apartado que se refiere como “supuestos” “GASTOS NO REPORTADOS Y DETECTADOS

MEDIANTE UN EJERCICIO DE MONITOREO A REDES SOCIALES Y DIVERSOS MEDIOS INFORMATIVOS” me permito señalar lo siguiente:

De inicio, niego lisa y llanamente lo aseverado por el doliente al tenor de que el que suscribe, violenté principio alguno de los que sustentan la competencia electoral, tales como el de Equidad o Legalidad; menos de ley o reglamento alguno aplicado a la materia, mismo que señalare a continuación:

Con relación al apartado señalado como “GASTOS NO REPORTADOS Y DETECTADOS MEDIANTE UN EJERCICIO DE MONITOREO A REDES SOCIALES Y DIVERSOS MEDIOS INFORMATIVOS” a través del cual refiere lo siguiente:

(...)

Con relación a todos y cada uno de los objetos señalados por el ahora denunciante e identificados en el presente escrito con las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I (con excepción a lo descrito como: Gorra color rosa con blanco “Anaya”, Bandera color naranja del PAN, Mandil color naranja y la Sombrilla), las mismas fueron reportadas en tiempo y forma, conforme a derecho, en el sistema Integral de Fiscalización (SIF) a través de las siguientes facturas, respaldado con sus respectivos contratos pólizas SIF y testigos, mismas que se acompañan al presente, a fin de que se tenga debidamente acreditado lo manifestado en este punto:

[Se insertan tablas en el escrito de queja]

(...)”

X. Solicitud de ejercicio de oficialía electoral a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto.

a) El diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, mediante ocurso INE/UTF/DRN/1180/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, realizara lo conducente a fin de certificar diversas ligas de internet correspondiente a videos denunciados, así como que diera fe de sus características y contenido. (Fojas 450 a la 451 del expediente).

b) Mediante oficio no. INE/DS/3022/2018, recibido el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho y signado por la Lic. Daniela Casar García encargada del despacho de la Dirección referida, se da cuenta del acuerdo de admisión de fecha diecisiete de

agosto de dos mil dieciocho, por el cual se recibe la información presentada con oficio INE/UTF/DRN/1180/2018 y se registra con número de expediente INE/DS/OE/575/2018 a efectos de admitir la solicitud de certificación de diversas ligas de internet correspondiente a videos denunciados, así como que diera fe de sus características y contenido en el escrito de queja, así como su instrucción a los funcionarios públicos investidos de fe pública adscritos a la dirección de Oficialía Electoral, a fin de corroborar la existencia de las mismas; enviar la documental pública, con la que se acredite el hecho (Fojas 452 a la 455 del expediente).

c) El veinte de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/3032/2018 signado por la Lic. Daniela Casar García encargada del despacho de la Dirección referida, se remite original del acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/1504/2018, misma que consta de ciento ochenta y seis fojas y un disco compacto que contiene la certificación ligas de internet correspondiente a videos denunciados de la página de Facebook que se presentó en el oficio de solicitud de certificación. (Fojas 456 a la 664 del expediente).

XI. Razones y Constancias.

a) El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, mediante Razón y Constancia se procedió a revisar dentro del portal oficial del Sistema de Rendición de Cuentas y Resultados de Fiscalización de este instituto lo relativo a ingresos y egresos reportados por el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez candidato del Partido Acción Nacional postulado a Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, en este sentido se observó que existen ingresos por un monto de \$7,405,212.55 (siete millones cuatrocientos cinco mil doscientos doce 55/100 M.N.) y egresos por un monto \$6,078,830.97 (seis millones setenta y ocho mil ochocientos treinta pesos 97/100 M.N.). (Fojas 647 a la 648 del expediente).

b) El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, mediante Razón y Constancia se procedió a revisar la página de la red social Facebook, correspondiente según el quejoso al C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, misma de la que se hizo constar el contenido del perfil principal, así como del mosaico de la galería de videos. (Fojas 645 a la 646 del expediente).

c) El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho se realizó Razón y Constancia de distintas pólizas obtenidas del Sistema integral de Fiscalización en las cuales el sujeto incoado reporta diversos conceptos de gasto de los que se encuentran denunciados en el escrito de queja. (Fojas 649 a la 650 del expediente).

XII. Acuerdo de alegatos. El treinta de agosto de dos mil dieciocho, una vez realizadas las diligencias y actuaciones correspondientes en la sustanciación del caso, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, por lo cual se ordenó notificar a los quejosos e incoados, para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que considerarán convenientes (Foja 651 del expediente)

XIII. Notificación de alegatos al C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez candidato del Partido Acción Nacional postulado a Presidente Municipal por el municipio de Monterrey Nuevo León.

a) Mediante acuerdo de fecha treinta de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral a efecto de que se constituyera en el domicilio y notificara el inicio de procedimiento de queja de mérito al C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, otrora candidato a Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, por el Partido Acción Nacional.

XIV. Notificación de alegatos al Partido Acción Nacional.

a) El treinta de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/43083/2018 solicitó al Lic. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante este Consejo General manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado.

XV. Notificación de alegatos al PRI.

a) El treinta de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/43082/2018 solicitó al Lic. Emilio Suarez Licon, Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante este Consejo General manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado.

XVI. SM-RAP-80/2018. El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, dictó sentencia al recurso de apelación presentado por el Partido Revolucionario Institucional, en donde ordena

al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, sustanciar y resolver la queja de mérito, en un plazo de diez días naturales.

XVII. Cierre de instrucción. El diez de septiembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.

C O N S I D E R A N D O

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es **competente** para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.

En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.

2. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo del presente procedimiento se constriñe en determinar si el Partido Acción Nacional y su entonces candidato a presidente municipal de Monterrey, Nuevo León, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, omitieron reportar diversos ingresos o egresos, que en su conjunto actualizarían un presunto rebase

al tope de gastos de campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León.

En este sentido, debe determinarse si fuere el caso, si los sujetos obligados incumplieron con lo dispuesto en los artículos 431, numerales 1, en relación con el artículo 443, numeral 1, inciso f); 445 numeral 1 incisos e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos; y los artículos 96, numeral 1, 127 y 223, numerales 6 e) del Reglamento de Fiscalización.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

“Artículo 431.

1. Los candidatos deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto los informes de campaña, respecto al origen y monto de los ingresos y egresos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las reglas establecidas en la Ley General de Partidos Políticos.

(...)

Artículo 443

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:

(...)

f) Exceder los topes de gastos de campaña;

(...)

Artículo 445.

1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargo de elección popular a la presente Ley:

(...)

e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos por esta Ley;

(...)”

Ley General De Partidos Políticos

“Artículo 79.

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:

(...)

b) Informes de Campaña:

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;

II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior, y

III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres días concluido cada periodo.

(...)”

Reglamento De Fiscalización

“Artículo 96.

Control de los ingresos

1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento.

(...)

Artículo 127.

Documentación de los egresos

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.

2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.

3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.

(...)

Artículo 223.

Responsables de la rendición de cuentas

(...)

6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán responsables de:

(...)

e) No exceder el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por el Consejo General.

(...)”

De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos políticos se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas; así como apegarse al tope de gastos de campaña establecido por el Consejo General de este Instituto.

Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente político no presente la documentación con la que compruebe el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente los requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los recursos.

Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad y administración de los entes políticos, conducen a la determinación de que la fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento privado no se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo, custodia y destino.

De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente las sanciones que correspondan.

Así pues, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización

de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera transparente ante la autoridad, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral; en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el registro contable de los egresos, es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por objeto y/o resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el Proceso Electoral. Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación de la ciudadanía y las personas que habitan la República en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Asimismo, señalan la obligación a los partidos políticos de no rebasar los topes de gastos de campaña establecidos por este Consejo General para cada una de las elecciones federales y locales en las cuales los institutos políticos participen, por lo cual, los gastos que realicen con motivo de las campañas electorales de los candidatos que postulen para algún cargo de elección popular deberán ceñirse al tope establecido para tal efecto.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización

de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

En este sentido, de los artículos, 431, numerales 1, en relación con el artículo 443, numeral 1, inciso f); 445 numeral 1 incisos e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; y los artículos 96, numeral 1, 127 y 223, numerales 6 inciso e) y del Reglamento de Fiscalización se desprenden las obligaciones de los sujetos obligados de registrar contablemente la totalidad de los ingresos y egresos realizados, toda vez que dicho régimen y limitante, respectivamente, permiten que la contienda electoral se desarrolle con estricto apego a lo establecido en la normatividad electoral, generando que la misma se desarrolle en condiciones de legalidad y equidad, pues todos los entes obligados se encuentran sujetos a que su actuación se realice dentro del marco legal.

Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.

En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis a la totalidad de los conceptos denunciados y la presunción del rebase de tope de gastos de campaña que a dicho del quejoso, en su conjunto, constituye una presunta omisión en cuanto a la obligación del sujeto obligado señalado respecto la rendición de cuentas conforme a la norma de la totalidad de los gastos y el tope de gastos de campaña establecidos por el Consejo General de este Instituto en el marco del periodo de campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León.

Origen del procedimiento

El veinticinco de julio de dos mil dieciocho se recibió en la Unidad Técnica de fiscalización el escrito INE/JLE/NL/UTF-EF/458/2018 signado por el Maestro Pablo Jasso Eguía en su carácter de enlace de fiscalización de la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León, mediante el cual remite constancias del escrito de queja presentado por José Juan Hernández Hernández, representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Nuevo León en contra del Partido Acción Nacional y su entonces

candidato a presidente Municipal de Monterrey, el **C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez**, denunciando hechos que considera podrían constituir la omisión de reportar ingresos y egresos que en su conjunto pudieran constituir un rebase a los topes de gasto de campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León.

En el numeral SÉPTIMO del escrito de queja antes mencionado, se narra que de un monitoreo exhaustivo a las redes sociales del candidato denunciado y de la información obtenida de otros medios informativos, se detectaron gastos erogados por el incoado, que a juicio de la parte denunciante, rebasan hasta por un 14.06% (catorce punto cero seis por ciento), el tope de gastos de campaña establecido por la autoridad electoral que para el municipio de Monterrey, mismo que asciende a la cantidad de **\$8,410,871.90** (ocho millones cuatrocientos diez mil ochocientos setenta y un pesos 90/100) según se aprobó en el acuerdo del consejo General de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, identificado como CEE/CG/49/2017.

Ahora bien, la parte quejosa divide su escrito en tres grandes apartados, en los cuales menciona dos tipos de gastos.

El primero consistente en **propaganda utilitaria** en el cual se observan nueve conceptos distintos, que según su cálculo derivado del monitoreo a las redes sociales del entonces candidato, suman la cantidad de **\$262,000.00** (doscientos sesenta y dos mil pesos) mismos que se detallan a continuación:

1. Playera tipo polo color azul con la leyenda “Felipe”,
2. Playera tipo polo color negro con la leyenda “Felipe”,
3. Sombrillas color azul y blanco,
4. Bolsa ecológica color blanco con la leyenda “Felipe”,
5. Bolsa ecológica color azul con la leyenda “Felipe”,
6. Bolsa ecológica con suaje, plana color azul con la leyenda “Felipe”,
7. Bolsa ecológica blanca con letras color rojo con Asa,
8. Gorro color rosa con blanco con la leyenda “Anaya” y
9. Bandera color naranja del PAN,

El segundo, referente a lo que denominan como **gastos operativos**, extraídos y calculados de las publicaciones en redes sociales del candidato, en donde se encuentran diversos conceptos que presuntamente no se encuentran debidamente reportados y que en suma constituirían la cantidad de **\$1,436,643.35** (un millón cuatrocientos treinta y seis mil seiscientos cuarenta y tres pesos 35/100) que son:

1. Combustible.
2. Inmueble utilizado para casa de campaña.
3. Alimentos
4. Equipo de sonido
5. Banner (lonas publicitarias)
6. Carpas
7. Fotografía
8. Lugar
9. Pantalla
10. Mesa
11. Template
12. Batucada

En tercer lugar, se refiere la presunta erogación por concepto de una Aplicación móvil denominada “El Dx Ciudadano”, que presuntamente el candidato utilizó durante su campaña, según la cual la parte quejosa estima un gasto de por lo menos \$900,000.00 (novecientos mil pesos 00/100).

Con lo anterior asentado, el día veintisiete de julio de dos mil dieciocho se dictó el Acuerdo de admisión de procedimiento, en el cual al cual se asignó el número de expediente INE/Q-COF-UTF/664/2018/NL; una vez realizado lo anterior, la autoridad procedió a notificar el inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General, al Presidente de la Comisión de Fiscalización; a las partes quejasas así como emplazar al entonces candidato a Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, así como a la Representación del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto, para que en un término de cinco días expusieran lo que a su derecho conviniera.

Una vez que el Partido Acción Nacional conoció debidamente los elementos de prueba en contra de su otrora candidato, en su escrito de respuesta, recibido el día cinco de agosto del presente en la Unidad Técnica de Fiscalización, exhibió distintas pólizas y documentación soporte a fin de acreditar el reporte de los gastos por parte de su representado, mismas que se cotejaron por esta autoridad con las que se encuentran en la contabilidad en línea del otrora candidato para verificar su autenticidad, diligencia que obra en razón y constancia del veintinueve de agosto de dos mil dieciocho dentro del expediente del procedimiento que por esta vía se resuelve.

Ahora bien, dado que se denuncia en el escrito de queja un presunto rebase al tope de gastos de campaña, en la misma fecha que se señala en el párrafo anterior,

mediante Razón y Constancia se procedió a revisar dentro del portal oficial del Sistema de Rendición de Cuentas y Resultados de Fiscalización de este instituto lo relativo a ingresos y egresos reportados por el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez candidato a Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, en este sentido se observó que existen ingresos por un monto de \$7,405,212.55 (siete millones cuatrocientos cinco mil doscientos doce 55/100 M.N.) y egresos por un monto \$6,078,830.97 (seis millones setenta y ocho mil ochocientos treinta pesos 97/100 M.N.).

Una vez que la autoridad analizó las constancias que obran en la contabilidad en línea del otrora candidato a la presidencia municipal de Monterrey, se procedió a su valoración a fin de fijar un posicionamiento sustentado en la objetividad, imparcialidad, la lógica y el sano juicio que caracterizan al Instituto Nacional Electoral.

En este sentido para efectos de mayor claridad el análisis del presente estudio de fondo se dividirá en los siguientes apartados:

Apartado A. Conceptos denunciados que aun cuando no se tiene certeza de la existencia de los mismos, se encuentran reportados en el Sistema Integral de Fiscalización.

Apartado B Conceptos denunciados de los cuales esta autoridad no tiene certeza de la existencia de los mismos y se consideran inverosímiles.

Apartado C Respecto al Procedimiento Especial Sancionador identificado como PES-123/2018, dictado por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, ofrecido como prueba en el expediente en que se actúa.

Apartado D Respecto del no reporte de 130 videos exhibidos en internet.

Apartado E Estudio del presunto rebase de topes de campaña.

Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que con el objeto de sistematizar la presente Resolución, llevo a cabo esta autoridad electoral para analizar por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de la autoridad electoral.

A continuación, se presenta el análisis en comentario:

APARTADO A. Conceptos denunciados que aun cuando no se tiene certeza de la existencia de los mismos, se encuentran reportados en el Sistema Integral de Fiscalización.

Una vez descritas las diligencias realizadas, establecidos los hechos denunciados y las pruebas aportadas, se procede a valorar las mismas.

Como ya fue mencionado anteriormente, las pruebas con las que pretende acreditar su dicho el quejoso, constan eminentemente de ciento ochenta y tres ligas de internet que contienen:

- a) Captura de pantallas de redes sociales (Facebook), relativas a la campaña del C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, acompañadas de ligas respectivas asociadas al gasto presuntamente no comprobado que se pretende acreditar;
- b) Una relación de estimaciones de costos por concepto, posiblemente a precio de mercado de los bienes y servicios identificados de la campaña al C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez; sin que se aporten mayores detalles del origen de la cotización de cada uno;
- c) Una relación de itinerario, en donde se señalan vínculos de videos y fotografías durante el periodo denunciado en la queja, sin señalar a detalle eventos concretos ni el lugar exacto donde haya celebrado, ciñéndose únicamente a la entidad de Nuevo León y a la Ciudad de Monterrey, respecto de algún acto de campaña;
- d) Una relación de ligas correspondientes a las páginas de Facebook e Instagram en los que se localizan imágenes y videos donde supuestamente se observan los conceptos de gasto denunciados.

Es menester mencionar sobre las pruebas señaladas en los párrafos anteriores, que por su naturaleza y origen no permiten a esta autoridad contar con los elementos de convicción ni con las condiciones objetivas para cuantificar una cantidad exacta de conceptos de gasto, sin incurrir en parcialidad, ya que de las probanzas allegadas por la parte quejosa, no es posible estimar cantidades sin caer en error.

Lo anterior ha sido explicado ya por el máximo Tribunal Electoral y se ha utilizado como criterio en diversas resoluciones administrativas y jurisdiccionales, debido a la naturaleza de los medios de comunicación denominados redes sociales, sobre la cual, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en

diversas sentencias ha establecido criterios orientadores² relacionados con las redes en comento, señalando entre otras cuestiones:

- Que el internet es una red informática mundial, que trasciende como un mecanismo para que cualquier persona pueda difundir y acceder a información de su interés, y su utilización permite la descentralización extrema de la información; por ello y debido a su rápida masificación en el espacio virtual, puede reproducirse con facilidad, especialmente tratándose de redes sociales, en las que sus usuarios intercambian información y contenidos (textos, imágenes, archivos, vínculos a otras páginas, entre otros), de modo que crean una comunidad virtual e interactiva.
- Que, derivado de la naturaleza de las redes sociales y las características aludidas, las publicaciones carecen de un control efectivo respecto de la autoría y de los contenidos que allí se exteriorizan.
- Que las redes sociales (como Facebook, twitter y YouTube) constituyen un espacio creado para intercambiar información entre los usuarios de esas plataformas en cualquier parte del mundo, donde además la comunicación se genera entre un gran número de usuarios que suben y bajan la información ahí difundida.
- Que atendiendo a la forma en que opera el internet, se puede colegir que existen grandes vacíos e impedimentos para que sus usuarios puedan ser identificados, así como una gran dificultad para establecer de manera fehaciente, la fuente de su creación, y en consecuencia, ello imposibilita el poder atribuir a un ente o sujeto la responsabilidad del contenido respectivo.

En ese mismo orden de ideas, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que la Legislación Electoral mexicana vigente carece de regulación del tema relativo al uso de redes sociales; en específico, como espacios para la difusión de cualquier tipo de propaganda, ya sea electoral o gubernamental, en el contexto del desarrollo del debate político y el acceso a la información por parte de la ciudadanía³. Así pues, mientras que algunos

² De conformidad con los criterios sostenidos al resolver los expedientes SUP-REP-168/2015 y su acumulado, SUP-REP-233/2015 y su acumulado, así como el SUP-RAP-160/2015.

³ Criterio sostenido en las sentencias identificadas con los números de expediente SRE-PSC- 268/2015 y SRE-PSC-3/2016, mediante la cual dicho órgano jurisdiccional resolvió el caso bajo un nuevo método de análisis, que parte de la naturaleza y alcances de este tipo de plataformas, en el contexto del ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión y el margen reducido de las restricciones que son susceptibles de imponerse, y no partió del contenido, temporalidad o personas

medios de comunicación (como la radio, la televisión y los medios impresos) tienen un marco normativo definido a nivel constitucional y legal, la situación de Internet, en específico las redes sociales carecen de un escenario de regulación normativo.

Respecto de las redes sociales (como Facebook, twitter y YouTube), ha sostenido⁴ que nos encontramos ante espacios de plena libertad y con ello, se erigen como un mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada; consciente en la toma de decisiones públicas que trascienden al mejoramiento de la calidad de vida del pueblo; mismas que facilitan la libertad de expresión y de asociación; permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y potenciar la colaboración entre personas.

Bajo este panorama, el estudio de la naturaleza y alcances de las redes sociales, involucra derechos fundamentales de libertad de expresión y de información consagrados en el artículo sexto constitucional, toda vez que se incluye como herramienta para el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información el acceso a Internet y banda ancha. En ese sentido, el avance en las tecnologías ha generado la aparición de nuevos escenarios para la expresión de las ideas y el acceso a la información, como lo son Facebook, Twitter y YouTube.

En efecto, en Internet existen plataformas electrónicas que se han convertido en espacios virtuales en los cuales, los usuarios pueden registrarse libremente para ver y compartir diversos contenidos tales como videos, fotografías, artículos, documentos, e información en general sin que pueda identificarse por quien fueron creados originalmente, ni verificarse la veracidad de los mismos.

Por consiguiente, la información obtenida de redes sociales, es insuficiente por sí sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados, tomando en consideración que la queja de mérito refiere como circunstancias de tiempo, modo y lugar las contenidas en las redes sociales en cuestión, advirtiéndose lo siguiente:

- Tiempo, fechas en que subió la imagen.
- Modo, lo que ahí se observa. (eventos públicos, recorridos, mítines, etc.)
- Lugar, los referidos en la red social.

involucradas, esto es, el análisis debe realizarse a partir de la naturaleza de la red social Facebook, al considerar que en un ejercicio de ponderación debe prevalecer la tutelada del ejercicio de la libertad de expresión.

4 A partir de lo resuelto en el procedimiento especial sancionador de órgano central SRE-PSC-268/2015; así como en los expedientes SRE-PSC-268/2015, SRE-PSC-274/2015, SRE-PSC-275/2015, SRE-PSC-283/2015, SRE-PSC-284/2015, SRE-PSC-285/2015, SRE-PSC-3/2016 y SRE-PSD-520/2015 y SRE-PSD-521/2015 acumulados, estos últimos confirmados por la Sala Superior mediante sentencia dictada en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-3/2016.

Adicionalmente se tiene que valorar la diferencia entre el tiempo en que se realiza la toma de una fotografía y el momento en que se publica en una red social.

Por cuanto hace a los tiempos y ubicaciones de publicación, debe establecerse que estos se encuentran definidos por el usuario de la cuenta de la red social; ello en virtud de que existe la posibilidad de una variación entre el tiempo real de la realización del acto y la ubicación de éste, en relación con la fecha y lugar en la que el acto se difundió en la red social, atendiendo a los siguientes elementos:

- Día, hora y ubicación de la realización del acto.
- Día, hora, zona horaria y ubicación del dispositivo móvil o computadora en la que se realiza la publicación.
- Día, hora, zona horaria y ubicación, en su caso de las modificaciones a la publicación primigenia.
- Día, hora y ubicación en que se compartió la publicación por parte de otro usuario desde la publicación original.

De lo anterior, se desprende que la temporalidad y ubicación de un acto no necesariamente es coincidente con la realidad histórica del momento en que se realizó el mismo; aunado a que las redes sociales permiten la alteración parcial o total del contenido de las imágenes y de la información difundida en relación a las mismas, ya sea por el usuario creador o por usuarios distintos a su autor.

Es decir, se tiene conocimiento que la fotografía digital es la imagen por excelencia de las publicaciones en las redes sociales, de tal forma que la consideramos como parte de nuestra vida cotidiana, se presenta como algo normal en nuestro día a día; sin embargo, no perdemos de vista que dichas fotografías son imágenes susceptibles de modificarse y transformar lo que se espera de ellas; lo que nos lleva al tema de la certificación.

Las imágenes difundidas en las redes sociales trastocan todo aquello relacionado con la legitimidad y veracidad, llevándonos a cuestionar y explorar las percepciones visuales insertándonos en el campo de la interpretación. La fotografía digital se centra en la interacción y la participación social, lo cual cuestiona y reinventa el propio concepto de Imagen, los márgenes de seguridad y la construcción de la identidad.

Como se observa, el quejoso hace propios los hechos que se visualizan en las redes sociales para cumplir con el supuesto establecido en el artículo 29, numeral 1, fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de

Fiscalización y por otra parte en cuanto al caudal probatorio, relaciona la existencia de los hechos que ahí se observan, ya sea por la certificación que realiza la autoridad de la liga de internet que dirige el vínculo a la red social o por haber presentado de forma física o digital el contenido de la liga de internet relacionada, es decir, el contenido de la red social.

En este orden de ideas, con la finalidad de vincular los elementos probatorios con los hechos, sostiene que el rebase de topes se actualiza con los elementos de prueba enunciados o presentados, por lo que por su propia naturaleza se vincula con todas y cada una de las pruebas que forma parte integral del escrito de queja.

Cabe hacer mención que dichos elementos probatorios que el quejoso acompaña en su escrito de queja, y que como ya fue mencionado se encuentran soportados con una dirección electrónica, los presenta con una serie de inconsistencias, como la falta de circunstancias de modo, tiempo y lugar, ya que el quejoso pretende acreditar conceptos de gastos por encima de las siguientes irregularidades:

- a. No se observan de manera clara los conceptos que son denunciados.
- b. No se observan los conceptos denunciados.
- c. No se puede establecer el carácter cuantitativo de cada concepto, además de que el quejoso no presenta un total por cada concepto denunciado, sino que se constriñe a señalar cantidades estimadas.
- d. El concepto denunciado pertenece a otras campañas, las cuales no son objeto del presente procedimiento.
- e. No se presenta el lugar exacto donde se actualizó el concepto de egreso.
- f. No se presenta el modo exacto de cómo fue repartida esa propaganda.
- g. No se puede establecer el beneficio y/o la relación directa con la campaña del otrora candidato.
- h. Reporta egresos por conceptos de eventos que se vislumbran como no onerosos.
- i. No toma en cuenta las condiciones propias del entorno en donde pueden existir bienes que no necesariamente estuvieran relacionados con la campaña.

Considerando los párrafos precedentes, se puede concluir que las redes sociales son espacios de libertad y con ello, se erigen como un mecanismo de información, que facilitan la libertad de expresión y de asociación; por lo que el contenido de las redes en comento en su maximización representa la libertad individual o colectiva de manifestar ideas escritas o transmitir imágenes por dicho medio con la finalidad de obtener reacciones en general.

Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales en procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene como premisa el alcance que origina una prueba técnica⁵, toda vez que del contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos, los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los que se pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de prueba adicionales

Consecuente con lo anterior, de la valoración al contenido de las redes sociales, la autoridad electoral únicamente cuenta con indicios de los hechos que se pretenden acreditar, situación que trasciende de forma directa a las circunstancias de tiempo, modo y lugar señaladas en el escrito de queja, pues la publicación de una imagen en determinada fecha no implica que la misma haga constar que un hecho aconteció en la fecha de exposición de la imagen o las características del acto que se observa como lo son eventos públicos y caminatas, así como, el número cierto y tipo de conceptos de gasto que se entregaron o en su caso si los mismos constituyen un beneficio a la campaña electoral de que se trate.

Por otra parte, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los medios de prueba que aporten los quejosos para sustentar los mismos, deben estar orientados a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir las conductas presuntamente infractoras, éstas se vinculen directamente con las circunstancias que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así como el lugar y la temporalidad en que acontecieron, mismas que deben de vincularse con los elementos de prueba que sustenten sus cada uno de los hechos descritos.

Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral se encuentre en aptitud de realizar las diligencias que considere pertinentes para en su caso, obtener elementos adicionales de prueba que le permitan determinar acreditar o desvirtuar la pretensión del quejoso.

Ello es así, en virtud de que dada la naturaleza de los procedimientos administrativos sancionadores, como el denominado de queja en materia de fiscalización; en materia de prueba, desde el momento de la presentación de la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las pruebas o indicios pertinentes para demostrar los hechos que motivan su denuncia.

⁵ De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización.

En este tenor, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su artículo 29 enlista los requisitos que toda queja debe satisfacer,⁶ entre ellos:

“1. Toda queja deberá ser presentada por escrito y cumplir con los requisitos siguientes:

(...)

III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja o denuncia;

IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados;

V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de cualquier autoridad.

(...)”

[Énfasis añadido]

Del precepto transcrito se desprende que los denunciantes se encontraban sujetos a realizar una narración expresa y clara de todos los hechos en los que se sustenta la queja, a describir todas y cada de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se suscitaron los mismos (y en el caso que nos ocupa, las relativas a cada uno de los conceptos denunciados) y a enlazadas entre sí, de tal manera que resulte verosímil para la autoridad la versión de los hechos puestos a su consideración; así como acompañar a su escrito de queja los medios de prueba, aun aquellos de carácter indiciario que soporten sus aseveraciones; lo que resulta necesario para evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa general injustificada.

En este caso, nos encontramos frente al ofrecimiento de pruebas técnicas por parte del denunciante, las cuales carecen de mayores precisiones respecto de los hechos que pretende acreditar, pues únicamente muestra la fotografía, y la mención de elementos que considera el quejoso como gasto que debió reportar el denunciado

Así, del análisis de la totalidad de las documentales técnicas que ofrece, no se advierten elementos que permitan acreditar o corroborar la certeza respecto del

⁶ El texto del artículo pertenece a la redacción vigente al momento de la presentación de los escritos de queja; esto es, previo a las modificaciones al Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobadas por el Consejo General el 16 de diciembre de 2015.

lugar preciso en el que se llevaron a cabo los eventos, donde supuestamente se entregó o utilizó los artículos denunciados, se limita a mencionar los objetos que se hacen presentes en las imágenes sin proporcionar un vínculo que permita relacionar los conceptos denunciados con la campaña del candidato incoado.

Esto resulta necesario, puesto que al momento en que esta autoridad realiza las diligencias, se debe conocer con la mayor precisión posible el lugar al cual dirigir la investigación. Por lo que el quejoso aporta pruebas en las cuales no se efectuó una revisión independiente respecto del contenido y veracidad de la información proporcionada, por lo tanto, el análisis y resultados podrían verse afectados en caso de que dicha información no sea correcta y/o precisa; es decir, se pronuncia sobre la falta de veracidad de su dicho.

Ahora bien, dichos elementos probatorios consistentes en direcciones electrónicas donde aparecen videos e imágenes, tienen el carácter de pruebas técnicas, de las cuales solo generan indicios de la existencia de lo que se advierte en ellas y son insuficientes, por si solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen, lo anterior de conformidad a la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación radicada bajo el número 4/2014. Misma que se transcribe a continuación:

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.

Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas, es de carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar,

así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser administradas, que las puedan perfeccionar o corroborar, por lo que no dan cuenta de la existencia de la propaganda y eventos denunciados.

En esta tesitura, las pruebas ofrecidas resultan insuficientes para acreditar que el **C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez y el Partido Acción Nacional**, hayan sido omisos en el reporte de gastos que se le pretenden imputar en el escrito inicial de queja, y como consecuencia de ellos, se hubiese actualizado un rebase en el tope de gastos de campaña, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

Ahora bien, esta autoridad con el fin de ser exhaustiva y a efecto de comprobar el dicho de los denunciados, recurrió al Sistema Integral de Fiscalización, encontrando el reporte por conceptos de Alimentos, Araña para lona, Banner, Batucada, Banda de música, Carpa, Equipo de audio, Fotografía, Luces, Lugar, Mampara, Mesa, Micrófono, Pantalla, Planta de luz, Proyecto, Salón, Sillas, Sonido y Templete, lo que al ser información obtenida de los archivos de la Dirección de Auditoría que forma parte integral de esta Unidad Técnica de Fiscalización, tiene el carácter de documental pública, lo que hace pleno el reporte del gasto por la contratación de la propaganda y los servicios antes mencionados.

En sintonía con lo que ha sido resuelto en el apartado previo, en el presente apartado se concluye sobre la totalidad de hechos que han sido denunciados, a fin de que esta autoridad se pronuncie respecto de la totalidad de ellos, conforme lo dispone el principio de exhaustividad, para lo cual sirve de sustento la Jurisprudencia número 43/2002, de rubro ***“PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN”***.

Derivado de los pronunciamientos anteriores y de que los quejosos denuncian actos de campaña el Partido de Acción Nacional y su entonces candidato a Presidente Municipal de Monterrey Nuevo León, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, por los cuales presuntamente incurrió en diversas irregularidades, adjuntando a su escrito impresiones de fotografías de la red social denominada Facebook, en las cuales según su dicho, se observan eventos en los que participó el candidato denunciado, así como la existencia de propaganda a su favor la cual no fue reportada en el informe de campaña correspondiente.

Así las cosas, del análisis al escrito de queja, se advierte que el mismo no contenía información precisa de ubicación, es decir de condiciones de lugar, de los conceptos referidos, ni tampoco elementos temporales que permitieran a esta autoridad tener certeza de que los gastos denunciados fueron efectivamente entregados en el marco de la campaña. Tampoco era posible acreditar mediante las direcciones electrónicas proporcionadas, un gasto o una infracción en materia de fiscalización, puesto que en las mismas no se advertía información mínima para acreditar los lugares en los que se encontraba la propaganda.

No obstante, esta autoridad llevó a cabo diversas diligencias con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción a partir de los indicios aportados con la queja, entre las que destaca por un lado, el requerimiento a la Oficialía Electoral de este Instituto de la certificación de las ligas por las cuales se obtuvieron las imágenes y, por otro, la consulta a las direcciones electrónicas que proporcionó el quejoso, en la que se apreció la existencia de las probanzas técnicas de referencia, sin que se obtuvieran los datos de ubicación de la colocación de la propaganda o de la celebración de los eventos o condiciones para realizar una cuantificación objetiva de gastos.

En este sentido, aún y cuando las pruebas con las que pretende acreditar su dicho el quejoso, carecen de valor probatorio pleno por lo que no generan certeza de la existencia de los hechos denunciados, en atención al principio de exhaustividad, esta autoridad se pronunciará sobre aquellos hechos donde advierte la existencia de diversos ingresos o egresos por parte del candidato denunciado, en cuanto a varios conceptos.

En consecuencia y con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta autoridad electoral, con fecha de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, accedió al registro de la contabilidad del entonces candidato en el portal del Sistema Integral de Fiscalización, levantando razón y constancia de los hallazgos relativos respecto de los conceptos que se advierten de las probanzas que el quejoso aporta, específicamente en cuanto a la documentación referente a los registros contables.

Derivado de lo anterior, en la contabilidad del entonces candidato se encuentran los registros de ingresos y gastos reportados, conforme a la siguiente tabla:

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/664/2018/NL

ELEMENTO PROBATORIO	CONCEPTO	CANTIDAD DENUNCIADA	CANTIDAD REPORTADA	PÓLIZA	PERIODO	TIPO	SUBTIPO
Liga de Facebook	Alimentos	1160	9820	1	JE	NORMAL	DIARIO
Liga de Facebook	Equipo de sonido	21	\$212,280.00	8	1	NORMAL	DIARIO
Liga de Facebook	Bandera	No precisa	\$107,868.49	19	1	NORMAL	DIARIO
				30	1	NORMAL	DIARIO
				33	1	NORMAL	DIARIO
				36	1	NORMAL	DIARIO
				39	1	NORMAL	DIARIO
				61	1	NORMAL	DIARIO
Liga de Facebook	Arrendamiento de Inmueble	1	1	3	1	NORMAL	INGRESOS
Liga de Facebook	Gorras	No precisa	780	1	2	NORMAL	DIARIO
			500	5	1	NORMAL	DIARIO
			200	13	1	NORMAL	DIARIO
			200	14	1	NORMAL	DIARIO
			700	15	1	NORMAL	DIARIO
			200	17	1	NORMAL	DIARIO
			400	18	1	NORMAL	DIARIO
			334	21	2	NORMAL	DIARIO
			350	24	2	NORMAL	DIARIO
			333	27	2	NORMAL	DIARIO
			520	28	2	NORMAL	DIARIO
			600	29	1	NORMAL	DIARIO
			200	35	1	NORMAL	DIARIO
			100	54	2	NORMAL	DIARIO
			780	89	1	NORMAL	DIARIO
			800	92	2	NORMAL	DIARIO
			333	94	2	NORMAL	DIARIO
			800	95	2	NORMAL	DIARIO
			350	96	2	NORMAL	DIARIO
Liga de Facebook	Playeras	No precisa	900	1	2	NORMAL	DIARIO
			400	13	1	NORMAL	DIARIO
			100	14	1	NORMAL	DIARIO
			100	17	1	NORMAL	DIARIO
			400	18	1	NORMAL	DIARIO
			600	29	1	NORMAL	DIARIO
			100	35	1	NORMAL	DIARIO
Liga de Facebook	Banner (lona propagandística)	20	200	13	1	NORMAL	DIARIO
Liga de Facebook	Mandil	No precisa	250	13	1	NORMAL	DIARIO
Liga de Facebook	Bolsa Ecológica	No precisa	1000	13	1	NORMAL	DIARIO
			1333	17	1	NORMAL	DIARIO
			1333	35	1	NORMAL	DIARIO
Liga de Facebook	Manejo de Redes Sociales	No precisa	\$457,560.00	29	2	NORMAL	EGRESOS
			\$70,000.00	79	2	NORMAL	DIARIO
			\$387,560.00	33	2	NORMAL	DIARIO
			\$387,440.00	9	2	NORMAL	EGRESOS

Es necesario acotar sobre el concepto, “arrendamiento de inmueble” que el quejoso acepta en su escrito conocer del reporte del mismo en la contabilidad del ahora incoado; sin embargo, a su juicio el registro que se encuentra en el Sistema Integral de Fiscalización, se encuentra subvaluado al ser el inmueble reportado de menores metros cuadrados del real.

Sin embargo en la revisión de los informes respecto de la revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los Candidatos a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Nuevo León, que llevó a cabo esta autoridad y que fue aprobado en sesión del Consejo General el seis de agosto del presente año, no se observó subvaluación alguna del inmueble denunciado, aunado a que existió una observación sobre la casa de campaña, misma que quedó atendida en respuesta al oficio de errores y omisiones.

Ahora bien, tomando en cuenta que, de las probanzas aportadas por el quejoso, no era posible acreditar una cantidad concreta sobre los bienes o conceptos supuestos de una erogación, la tabla anterior muestra aquellos que derivado de una investigación el Sistema Integral de Fiscalización se encuentran reportados.

Lo anterior, tomando en consideración que el único elemento de prueba proporcionado por la parte quejosa fueron las fotografías aportadas en el escrito de queja y dado que éstas en muchas ocasiones no son claras y no aportan elementos externos con los cuales se pueda dar certeza de la ubicación exacta de los conceptos denunciados, ni prueban que se trate de distintas situaciones y no de las mismas pero fotografiadas de distintos ángulos, no resulta posible desprender un indicio con suficiente grado de convicción respecto a la existencia de dichos conceptos, pues el hecho denunciado solo se sostiene con pruebas técnicas, que no se encuentran concatenadas con elementos probatorios adicionales que les den certeza.

Sin embargo, cabe mencionar que las unidades reportadas por los conceptos referidos, se advirtió que lo que reportó el partido político fue en cantidad mayor, por lo que se da cuenta de que el registro de las operaciones sí tiene efectos vinculantes respecto de lo denunciado, en virtud de que esta autoridad no solo consideró la referencia al concepto, sino también las unidades involucradas de cada tipo.

En razón de lo anterior, y respecto de los gastos enlistados en el cuadro que antecede, lo cuales fueron utilizados para promocionar al entonces candidato del Partido de Acción Nacional a Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, el C.

Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, al ser concatenados con las razones y constancias levantadas por el Director de la Unidad de Fiscalización respecto de la información arrojada por el Sistema Integral de Fiscalización; hacen prueba plena de que los mismos fueron registrados por el denunciado en el Sistema Integral de Fiscalización en el marco de la campaña electoral referida.

Lo anterior, aunado a que el quejoso no aportó mayores elementos que pudieran llevar a esta autoridad a acreditar de que se tratan de gastos de campaña no reportados, se concluye que los conceptos fueron reportados en el informe de campaña correspondiente, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, pues como ya se manifestó, el quejoso únicamente aportó pruebas técnicas como soporte a sus afirmaciones, sin embargo, no presentó algún otro elemento que permitiera vincular los hechos denunciados.

En este orden de ideas, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por los entes involucrados, así como de las diligencias realizadas por esta autoridad, se tiene lo siguiente:

- Que las pruebas aportadas por el quejoso en su escrito inicial, consisten en videos y fotografías las cuales, por los argumentos vertidos anteriormente, son catalogadas como pruebas técnicas por lo que no generan certeza de la existencia de los hechos.
- Que esta autoridad con el fin de ser exhaustiva realizó una visita al portal del Sistema Integral de Fiscalización, lo que dio a conocer a esta autoridad que el candidato denunciado cuenta con el reporte por concepto de playeras, bolsas ecológicas, gorras, banderas, arrendamiento de la casa de campaña, alimentos, equipo de sonido, banners, lonas y manejo de sus redes sociales, mismos que se encuentran denunciados en el escrito inicial de queja.

Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el apartado de mérito, esta autoridad electoral cuenta con elementos de convicción que le permiten tener certeza de que el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez y el Partido Acción Nacional en el estado de Nuevo León registraron en el Sistema Integral de Fiscalización las aportaciones y los egresos que beneficiaron a su campaña; concluyendo que los sujetos obligados no vulneraron lo establecido en los artículos 431, numerales 1, en relación con el artículo 443, numeral 1, inciso f); 445 numeral 1 incisos e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos; y los artículos 96,

numeral 1, 127 y 223, numerales 6 e) del Reglamento de Fiscalización; por lo que se declara **infundado** el apartado objeto de estudio.

APARTADO B. Conceptos denunciados de los cuales esta autoridad no tiene certeza de la existencia de los mismos y se consideran inverosímiles.

Del análisis al escrito presentado, así como a las probanzas exhibidas, mismas que fueron analizadas en el apartado anterior, se advierte que el mismo contiene argumentos jurídicos genéricos con los que se pretende acreditar el presunto rebase de topes de gasto de campaña, el rebase al límite de aportaciones, omisiones en reportar gastos e ingreso, subvaluaciones y sobrevaluaciones.

Dichas aseveraciones se pueden advertir en las más de doscientas setenta y cinco fojas que componen el escrito y en las balanzas de comprobación simuladas que presenta el querellante, derivados de supuestas cotizaciones a precio de mercado de las cuales aducen los costos aproximados de los conceptos denunciados.

Es de mencionarse que las pruebas presentadas relativas a dichos bienes o servicios en la mayoría de los casos resultan inverosímiles al no concatenarse sobre ellas condiciones de modo tiempo y lugar y proceden de ligas de la red social Facebook.

Los conceptos fueron sistematizados y sintetizados por la Unidad Técnica de Fiscalización como se muestran en la siguiente tabla:

CONCEPTO DENUNCIADO	TIPO	OBSERVACIONES	ELEMENTO PROBATORIO
Batucada	Inverosímil	Sin condiciones de modo, tiempo, lugar, no se precisa cantidad	Liga de Facebook
Carpa	Inverosímil	Sin condiciones de modo, tiempo, lugar, no se precisa cantidad	Liga de Facebook
Fotografía	Inverosímil	Sin condiciones de modo, tiempo, lugar, no se precisa cantidad	Liga de Facebook
Lugar ⁷	Inverosímil	Sin condiciones de modo, tiempo, lugar, no se precisa cantidad	Liga de Facebook
Mesa	Inverosímil	Sin condiciones de modo, tiempo, lugar, no se precisa cantidad	Liga de Facebook
Pantalla	Inverosímil	Sin condiciones de modo, tiempo, lugar, no se precisa cantidad	Liga de Facebook
Sillas	Inverosímil	Sin condiciones de modo, tiempo, lugar, no se precisa cantidad	Liga de Facebook

⁷ Probablemente el quejoso se refiere a un sitio donde se realizó algún evento, sin embargo lo denomina de esta forma en su escrito, sin precisar situación geográfica exacta.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/664/2018/NL

CONCEPTO DENUNCIADO	TIPO	OBSERVACIONES	ELEMENTO PROBATORIO
Template	Inverosímil	Sin condiciones de modo, tiempo, lugar, no se precisa cantidad	Liga de Facebook
Combustible	Inverosímil	Sin condiciones de modo, tiempo, lugar, no se precisa cantidad	Presunción derivada de la necesidad de su existencia.
Aplicación el "Dx Ciudadano"	Inverosímil	Sin condiciones de modo, tiempo, lugar, no se precisa cantidad	Liga de internet, presuntamente de portal de noticias.

Ahora bien, como se ha señalado en el capítulo de pruebas ofrecidas en el escrito de queja, el denunciante presentó en copia simple, diversas imágenes a color que, de acuerdo a la liga o *link* de internet, corresponden a imágenes embebidas en internet y como consecuencia de ello, difundidas, en redes sociales, en específico en la red social denominada "Facebook".

Ahora bien es de mencionarse que el denunciado cargó en su contabilidad en línea una agenda con registro de ciento dieciocho eventos, según consta en razón y constancia del treinta de agosto de dos mil dieciocho, de los cuales ninguno fue oneroso.

Dicha situación impide saber con certeza a esta autoridad, a que eventos o gastos realizados en los mismos, pueda referirse el quejoso en su escrito inicial, y si en su caso las imágenes que allega como probanzas pudieran corresponder al mismo o a varios de ellos.

Aunado a ello, el Partido Acción Nacional, en su escrito de respuesta al emplazamiento realizado por esta autoridad, adjunta varias invitaciones que recibió el entonces candidato denunciado para asistir a eventos, mismos que registró dentro de su agenda en el Sistema Integral de Fiscalización como onerosos y que no le generaron ningún gasto.

En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en el contenido de las imágenes, argumentado que de ellas se advierte el itinerario de los eventos de campaña del candidato; así como, los conceptos de gasto que se observan en ellas, mismas que actualizarían presuntamente un rebase al tope de gastos de campaña fijado por la autoridad; por lo que el propio denunciante vincula las ligas de internet (Facebook) con eventos, así como con los conceptos de gasto que según su dicho se observan y las unidades a analizar, lo cual en conjunto pretende se cuantifique al tope en comento para actualizar el rebase de topes denunciado.

Sin embargo, el quejoso no muestra con suficiente claridad la relación existente entre los conceptos denunciados y las pruebas con los que pretende soportarlos, toda vez que presenta fotografías que pudieran ser coincidentes de un mismo evento y sobre los mismos conceptos diferenciándose únicamente en la perspectiva y sitio desde donde se capturaron, de esta manera el quejoso pretende que se contabilicen dobles gastos por concepto de una sola imagen.

Ahora bien, sobre la aplicación “Dx Ciudadano” es necesario decir que de acuerdo a la misma probanza que ofrece el quejoso, esta solo es un proyecto que el entonces denunciado anunció frente a un medio de comunicación, misma que impulsaría de ganar la presidencia municipal. Lo anterior se sustenta en la propia respuesta del Partido Acción Nacional al emplazamiento de mérito, en la cual se señala que dicha aplicación no existe, constituyéndose únicamente como promesa de campaña.

Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales en procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene como premisa el alcance que origina una prueba técnica,⁸ toda vez que del contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos, los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los que se pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de prueba adicionales.

Las pruebas descritas fueron ofrecidas por el quejoso, de conformidad con el artículo 16, párrafo 3, en relación con el artículo 14, numeral 6 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, aplicable de manera supletoria de conformidad con el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización; sin embargo, carecen de valor probatorio pleno, es decir, únicamente constituyen un indicio.

Así, de conformidad con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al dictar sentencia el 5 de octubre de 2017 en el expediente SUP-RAP-184/2017, se efectuó una debida valoración de las pruebas aportadas con el escrito de queja, dado que no cuenta con algún respaldo fáctico o jurídico el alcance probatorio que el quejoso pretende dar a las fotografías y videos que integran el acervo probatorio de referencia.

⁸ De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización.

Lo anterior, toda vez que las pruebas técnicas resultan insuficientes por sí mismas para acreditar los hechos que se pretenden demostrar, por la facilidad con la que pueden ser manipuladas y la dificultad de advertir cualquier posible alteración. Es por ello que en la referida sentencia se consideró correcto que la autoridad electoral haya desvirtuado la pretensión del quejoso a partir de señalar la insuficiencia del material probatorio.

En todo caso, aun de haber otorgado valor probatorio pleno a las pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso, ello de modo alguno sería suficiente para acreditar los extremos pretendidos, toda vez que lo único que podría demostrarse es que se realizaron diversos eventos, más no que se hubieran contratado los bienes y servicios que el quejoso aduce, ni que se hubieran erogado los supuestos gastos, porque de ninguna forma de las fotografías y videos sería posible advertir tal situación.

Aunado a que para acreditar su pretensión, el denunciante no presentó ningún elemento de prueba vinculándolo con dichos conceptos denunciados, es decir, no se encontraron indicios ni medios probatorios que soporten sus aseveraciones respecto de las erogaciones aludidas, por lo que esta autoridad se encuentra imposibilitada a dirigir la línea de investigación respecto de dichos conceptos.

Lo anterior es así, atendiendo a que la falta de circunstancias de tiempo, modo y lugar constituye un obstáculo para que la autoridad pueda trazar una línea de investigación, misma que le posibilite realizar diligencias para acreditar o desmentir los hechos denunciados, toda vez que la falta de elementos probatorios o indiciarios impiden que los hechos sean verosímiles; es decir, sólo si de los escritos de queja se hubieren desprendido elementos suficientes aún con carácter indiciario que hicieren presuponer la veracidad de los hechos denunciados (en relación a los conceptos que se analizan), los cuales a consideración del denunciante tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el Proceso Electoral y consecuentemente en el origen y destino de los recursos de los partidos políticos, la autoridad se hubiere encontrado facultada para ejercer sus facultades de comprobación en relación a los supuestos gastos, lo que en la especie no aconteció.

Así las cosas, para que la autoridad fiscalizadora pueda ejercer sus facultades indagatorias a efecto de constatar que se está ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en materia de origen, destino y aplicación de los recursos de los partidos y acreditar la omisión de registrar un gasto de campaña y cuantificarlo, es necesario primeramente que se tenga por acreditado el gasto, puesto que no puede

hacerse un deslinde de ambas conductas; es decir, los actos se encuentran vinculados uno con otro.

Visto lo anterior, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por los entes involucrados, así como de las diligencias realizadas por esta autoridad, se tiene que las pruebas aportadas por el quejoso no cuentan con datos suficientes que permitan acreditar datos de ubicación exacta, fecha de colocación y/o reparto de los conceptos denunciados dentro de la campaña del Partido de Acción Nacional y su candidato a Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez.

Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el apartado de mérito, esta autoridad electoral no tiene certeza de la existencia de los hechos dado que el quejoso pretendió acreditarlos mediante pruebas técnicas, por lo cual el Partido Acción Nacional y su entonces candidato a Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, no vulneraron lo establecido en **los artículos 431, numerales 1, en relación con el artículo 443, numeral 1, inciso f); 445 numeral 1 incisos e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos; y los artículos 96, numeral 1, 127 y 223, numerales 6 e) del Reglamento de Fiscalización**; por lo que deviene **infundado** el apartado de mérito.

APARTADO C. Respecto al Procedimiento Especial Sancionador identificado como PES-123/2018, dictado por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, ofrecido como prueba en el expediente en que se actúa.

Como se ha mencionado en los antecedentes de la presente Resolución, el quejoso ofrece como parte de su cumulo de pruebas los escritos relativos al Procedimiento Especial Sancionador identificado como PES-123/2018, dictado por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, en el cual actúan el Partido Revolucionario Institucional como denunciante y el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez.

En dicho juicio, el partido político se dolió de la presunta realización de actos anticipados de campaña por parte del incoado, al difundir en su cuenta del perfil de la red social Facebook durante el periodo de intercampaña la frase **#EstoTieneQueCambiar**, misma que durante el periodo de campaña, el entonces candidato Cantú Rodríguez utilizaría como parte de su propaganda política.

De tal forma, el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, resolvió el veinticuatro de mayo del presente año, que si se trataba de un acto anticipado de campaña y por lo mismo impuso una Amonestación Pública al entonces candidato por la vulneración a la normatividad electoral de la entidad al haber incurrido en la falta denunciada.

Dicha determinación fue impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación por el ciudadano incoado, dando lugar al expediente SM-JRC-134/2018 y SM-JDC-565/2018, Acumulados, bajo los cuales se confirmó la sentencia del Tribunal Local ordenándole modificar la sanción a una de índole pecuniario.

Es decir, que a través de las ordenanzas judiciales, se acreditó la infracción del entonces candidato, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, en cuanto al uso indebido de alusiones propagandísticas como actos anticipados de campaña.

Ahora bien, aun cuando dicha falta se encuentra firme en la sentencia referida, esta autoridad es incompetente para darle tratamiento en materia de fiscalización, ya que si bien se acreditó la conducta, no existen gastos que hayan derivado de la utilización de una frase a partir del etiquetado con el signo de almohadilla o numeral (*hashtag* #) por lo tanto, no hay un gasto que deba cuantificarse.

Esto, derivado de que la utilización de la almohadilla o numeral (*hashtag* #) indica dentro de plataformas de redes sociales la tendencia de un mismo tema, sobre el que cualquier usuario puede hacer un aporte u opinión personal con solo escribir dicho *hashtag* en el mensaje, sin necesidad de pautar o contratar un servicio de difusión masiva.

Bajo esta tesitura, de los elementos de objeto de análisis en el apartado de mérito, esta autoridad electoral no tiene un gasto que sumarle a la campaña del entonces candidato del Partido Acción Nacional a Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, por lo que no vulneraron lo establecido en **los artículos 431, numerales 1, en relación con el artículo 443, numeral 1, inciso f); 445 numeral 1 incisos e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos; y los artículos 96, numeral 1, 127 y 223, numerales 6 e) del Reglamento de Fiscalización;** declarando **infundado** el apartado de mérito.

APARTADO D. RESPECTO DEL NO REPORTE DE 130 VIDEOS EXHIBIDOS EN INTERNET.

Respecto a este punto, se advierte que el quejoso en su escrito inicial manifiesta lo siguiente:

“(…)

4. Gastos no reportados de producción, edición y seguimiento en campaña

Respecto del rubro de propaganda en internet se puede observar que la actividad de las redes sociales del candidato reflejan: Manejo de Redes, edición, producción, musicalización de videos; diseño de flayer digital y fotografía; así como diseño de imágenes; lo que implica un gasto considerable en el manejo de la promoción de su imagen, la cual se puede localizar en Facebook, Twitter e Instagram, concentrándose la mayor parte de la información en Facebook.

De lo antes descrito se puede hacer la clasificación siguiente:

CONSEC	TIPO DE VIDEO	CANTIDAD	COSTO APROXIMADO	COSTO TOTAL
1	Edición	2 7	2,800.00	75,600.00
1	Edición y producción	6 1	2,800.00	170,800.00
1	Edición, producción y musicalización	2	5,000	10,000.00
1	Producción de Spot	3 7	11,700.00	432,900.00
2	Video Margarita Zavala	1	11,700.00	11,700.00
3	Jingle	2	7,500.00	15,000.00
				\$716,000.00

Sumado a lo anterior, no se conoce el gasto que el candidato pudo haber pagado como compra de publicidad en Facebook y Twitter.

A continuación se describe de manera detallada cada uno de los link de los cuales se obtiene la información antes referida.

[Se inserta tabla en el escrito de queja con 127 filas que contienen cada una imagen con una descripción de video y vínculo de internet, más tres cuadros con las mismas características y el mismo número de videos]

(...)"

De tal forma, se tiene que los quejosos aducen la existencia de 130 (ciento treinta) videos exhibidos en la red social Facebook que presuntamente tendrían asociados gastos de producción, que no se encuentran debidamente reportados en la contabilidad del entonces candidato incoado.

En tal sentido, esta autoridad se avocó a revisar los asientos contables del Sistema Integral de Fiscalización relativos al entonces candidato, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez con el fin de conocer si dichos materiales audiovisuales se encontraban debidamente reportados, aunado a que se solicitó a la Dirección de Auditoria que informara si dentro de las facturas que el partido señaló en respuesta al emplazamiento se encontraban reportados los gastos inherentes a la producción de los videos objeto del presente apartado.

Cabe señalar que el Partido Acción Nacional en respuesta al emplazamiento expresamente señaló: *"el ahora denunciante señala que, el candidato electo para Presidente Municipal de Monterrey no reportó como gastos de campaña consistente en el 'Manejo de redes, edición, producción, musicalización de videos, imágenes' utilizados para la promoción de la imagen de campaña del compareciente, en las distintas redes sociales tales como Facebook, Twitter e Instagram, imputando además una adquisición de publicidad (pauta) particularmente en Facebook y Twitter, hechos que como quedará demostrada son completamente FALSOS, pues en su totalidad fueron debidamente reportados como gastos de campaña. Lo anterior es así ya que el Partido Acción Nacional, suscribió tres contratos de prestación de servicios para la Administración y Publicidad en redes con la persona ELLA MARKETING, S.A. de C.V. a fin de cubrir los siguientes servicios."* (para acreditar su dicho exhibe las facturas 242, 250 y 256)

Al respecto, la Dirección de Auditoría informó que, en dos de las tres facturas mencionadas anteriormente, esto es la 242 y 250, se desprende el concepto **"creación de contenidos digitales como: recorte de fotos, retoque de imágenes, diseño gráfico, Gift, infografía, ilustración, animaciones, video artículos, videos con ilustración. 306 (trescientas seis) horas totales de producción"**; sin embargo, únicamente se adjuntaron como evidencia que soporta el gasto 9 capturas de pantalla (esto en las pólizas 56 P1N subtipo diario y 33 P2N

subtipo diario, por las que reportaron los gastos en el Sistema Integral de Fiscalización), circunstancia que no permite a esta autoridad vincular los videos amparados por la factura con los que forman parte del escrito de queja y que dio origen al procedimiento que por esta vía se resuelve.

Es menester señalar que en la sustanciación de los procedimientos sancionadores es de vital importancia contar con una muestra del concepto que amparan las facturas y los pagos reportados dentro del Sistema Integral de Fiscalización, pues esas muestras son los elementos idóneos para tener por acreditado el debido reporte de un concepto. La ausencia de muestras imposibilita la confronta y, en el caso de los videos, es necesario el contenido completo de los mismos, pues simples imágenes no permiten identificar plenamente si se trata o no del mismo material.

Ahora bien, sobre los conceptos materia del presente apartado, es de señalarse que una vez desplegadas las facultades de investigación y al realizarse la visualización en línea de cada uno de ellos, concretamente en el perfil de la red social Facebook asociado a la cuenta de nombre “Felipe de Jesús Cantú Rodríguez”, fue evidente para esta autoridad que diversos de ellos cuentan con elementos de producción que le generaron un beneficio al entonces candidato y en consecuencia, debían ser reportados dentro de su contabilidad.

Así, se solicitó mediante ocurso INE/UTF/DRN/1204/2018 a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas de los Partidos Políticos de este instituto, que en uso de sus alcances técnicos realizara la valoración de cada uno de los ciento treinta materiales audiovisuales proporcionados por el quejoso, diligencia que se atendió mediante el similar INE/DEPPP/DE/DATE/5779/2018, en el cual se encuentra la valoración detallada de cada uno de los videos, así como los criterios utilizados.

Dichos criterios son:

- a) **Calidad de video para transmisión *broadcast*:** Manejo de resolución, *codecs*, tasa de bit *rate* y tipo de compresión para ser radiodifundidos
- b) **Producción:** Probable uso de alguno de los siguientes equipos: semi-profesionales o profesionales de producción como son: cámaras de foto o video semi-profesionales a profesionales, iluminación, microfónica semi-profesional a profesional, gruas, *Dolly cam*, *steady cam*, dron, entre otros.
- c) **Manejo de imagen:** calidad de imagen, encuadres, movimiento de cámaras, definición, uso de imágenes de stock, locaciones.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/664/2018/NL

- d) **Audio:** Calidad de grabación, locutores, jingles, mezcla de audios.
- e) **Gráficos:** Diseño, animaciones calidad de los mismos.
- f) **Post-producción:** Edición, efectos, mezcla de eventos y animaciones con imágenes, probable uso de equipo de edición de audio y video semi-profesional a profesional.
- g) **Creatividad:** uso de guion y contenidos.

A continuación, se muestra una tabla que contiene los 130 (ciento treinta) videos denunciados y su clasificación en términos generales:

N°	Vínculo del video	Producción (DEPPP)	Calidad broadcast (DEPPP)	Post-producción (DEPPP)	Video descalificado ⁹	Reportado (DAPPAP O)
1	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1873142086063612/	SI	NO	SI	NO	NO
2	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1872607856117035/	SI	NO	SI	SI	NO
3	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1872636739447480/	SI	NO	SI	NO	NO
4	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1873203456057475/	SI	NO	SI	NO	NO
5	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1874492305928590/	SI	NO	SI	NO	NO
6	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1874550309256123/	NO	NO	NO	SI	NO

⁹ Si los videos son derivados de recorridos, conferencias, noticieros, grabaciones con teléfono móvil o animaciones, los mismos no derivan en un gasto por concepto de producción o post-producción, por lo cual se descalifican para la cuantificación del gasto que benefició al candidato.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/664/2018/NL

N°	Vínculo del video	Producción (DEPPP)	Calidad broadcast (DEPPP)	Post-producción (DEPPP)	Video descalificado ⁹	Reportado (DAPPAP O)
7	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1875255279185626/	N/D	N/D	N/D	N/D	NO
8	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1875553772489110/	NO	NO	NO	SI	NO
9	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1876332642411223/	NO	NO	NO	SI	NO
10	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1877452912299196/	NO	NO	SI	SI	NO
11	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1877687782275709/	NO	NO	SI	SI	NO
12	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1877772328933921/	NO	NO	NO	SI	NO
13	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1878595202184967/	NO	NO	NO	SI	NO
14	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1878897485488072/	SI	NO	SI	NO	NO
15	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1879559388755215/	N/D	N/D	N/D	N/D	NO
16	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1879599062084581/	NO	NO	SI	SI	NO
17	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1879606698750484/	N/D	N/D	N/D	N/D	NO
18	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1879852475392573/	SI	NO	SI	NO	NO

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/664/2018/NL

N°	Vínculo del video	Producción (DEPPP)	Calidad broadcast (DEPPP)	Post-producción (DEPPP)	Video descalificado ⁹	Reportado (DAPPAP O)
19	https://www.facebook.com/fe lipedeiesuscantu/videos/1879887158722438/	N/D	N/D	N/D	N/D	NO
20	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1880128078698346/	SI	NO	SI	NO	NO
21	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1880870645290756/	SI	NO	SI	NO	NO
22	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1873208632723624/	SI	NO	SI	NO	NO
23	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1881223478588806/	SI	NO	SI	Noticiero	NO
24	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1881225218588632/	SI	NO	SI	Noticiero	NO
25	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1881908675186953/	NO	NO	SI	SI	NO
26	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1882002881844199/	SI	NO	SI	SI	NO
27	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1882053781839109/	SI	NO	SI	Noticiero	NO
28	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1882737915104029/	NO	NO	SI	SI	NO
29	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1882772628433891/	SI	NO	SI	SI	NO
30	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1882697441774743/	SI	NO	SI	NO	NO

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/664/2018/NL

N°	Vínculo del video	Producción (DEPPP)	Calidad broadcast (DEPPP)	Post-producción (DEPPP)	Video descalificado ⁹	Reportado (DAPPAP O)
31	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1883833244994496/	N/D	N/D	N/D	N/D	NO
32	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1883700081674479/	NO	NO	SI	SI	NO
33	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1883921921652295/	SI	NO	SI	NO	NO
34	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1884733261571161/	SI	NO	SI	NO	NO
35	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1884990724878748/	NO	NO	NO	SI	NO
36	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1885790931465394/	SI	NO	SI	NO	NO
37	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1885900334787787/	SI	NO	SI	NO	NO
38	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1885068811537606/	SI	NO	SI	NO	NO
39	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1886012084776612/	SI	NO	SI	NO	NO
40	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1885073414870479/	SI	NO	SI	NO	NO
41	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1888265307884623/	SI	NO	SI	NO	NO
42	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1889824371062050/	NO	NO	SI	SI	NO

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/664/2018/NL

N°	Vínculo del video	Producción (DEPPP)	Calidad broadcast (DEPPP)	Post-producción (DEPPP)	Video descalificado ⁹	Reportado (DAPPAP O)
43	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1889884674389353/	SI	NO	SI	SI	NO
44	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1890255781018909/	SI	NO	SI	Conferencia	NO
45	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1890257377685416/	SI	NO	SI	Conferencia	NO
46	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1888292761215211/	SI	NO	SI	SI	NO
47	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1890974910946996/	SI	NO	SI	SI	NO
48	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1891236890920798/	SI	NO	SI	NO	NO
49	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1888296311214856/	NO	NO	SI	SI	NO
50	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1892082620836225/	SI	NO	NO	SI	NO
51	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1892112084166612/	SI	NO	NO	SI	NO
52	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1893116764066144/	NO	NO	NO	SI	NO
53	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1888300434547777/	NO	NO	SI	SI	NO
54	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1894262783951542/	SI	NO	SI	NO	NO

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/664/2018/NL

N°	Vínculo del video	Producción (DEPPP)	Calidad broadcast (DEPPP)	Post-producción (DEPPP)	Video descalificado ⁹	Reportado (DAPPAP O)
55	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1888305737880580/	SI	NO	SI	SI	NO
56	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1896299217081232/	SI	NO	SI	Extracto de noticieros	NO
57	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1896315553746265/	NO	NO	SI	SI	NO
58	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1896928950351592/	NO	NO	NO	SI	NO
59	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1897256150318872/	SI	NO	SI	SI	NO
60	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1896169673760853/	NO	NO	SI	SI	NO
61	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1898107860233701/	SI	NO	SI	NO	NO
62	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1898109610233526/	SI	NO	SI	NO	NO
63	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1898930980151389/	SI	NO	NO	SI	NO
64	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1899040220140465/	N/D	N/D	N/D	N/D	NO
65	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1898118826899271/	SI	NO	SI	NO	NO
66	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1899334696777684/	NO	NO	SI	SI	NO

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/664/2018/NL

N°	Vínculo del video	Producción (DEPPP)	Calidad broadcast (DEPPP)	Post-producción (DEPPP)	Video descalificado ⁹	Reportado (DAPPAP O)
67	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1901195449924942/	N/D	N/D	N/D	N/D	NO
68	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1901204799924007/	NO	NO	NO	SI	NO
69	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1901048076606346/	N/D	N/D	N/D	N/D	NO
70	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1903010686410085/	N/D	N/D	N/D	N/D	NO
71	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1903067176404436/	SI	NO	SI	NO	NO
72	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1903080029736484/	NO	NO	NO	SI	NO
73	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1902444566466697/	NO	NO	SI	SI	NO
74	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1904350616276092/	NO	NO	SI	SI	NO
75	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1904344782943342/	SI	NO	SI	CONFERENCIA	NO
76	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1905653466145807/	SI	NO	SI	SI	NO
77	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1907898292587991/	SI	NO	SI	Conferencia	NO
78	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1908000569244430/	SI	NO	SI	SI	NO

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/664/2018/NL

N°	Vínculo del video	Producción (DEPPP)	Calidad broadcast (DEPPP)	Post-producción (DEPPP)	Video descalificado ⁹	Reportado (DAPPAP O)
79	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1908176649226822/	SI	NO	SI	NO	NO
80	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1908178995893254/	SI	NO	SI	NO	NO
81	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1910185979025889/	NO	NO	NO	SI	NO
82	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1910322332345587/	N/D	N/D	N/D	N/D	NO
83	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1910323879012099/	SI	NO	SI	NO	NO
84	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1911894122188408/	N/D	N/D	N/D	N/D	NO
85	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1914859571891863/	SI	NO	SI	VISITA/REC ORRIDO	NO
86	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1916044278440059/	SI	NO	SI	NO	NO
87	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1916794648365022/	N/D	N/D	N/D	N/D	NO
88	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1917224551655365/	SI	NO	SI	NO	NO
89	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1919131281464692/	SI	NO	SI	NO	NO
90	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1919425264768627/	NO	NO	NO	SI	NO

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/664/2018/NL

N°	Vínculo del video	Producción (DEPPP)	Calidad broadcast (DEPPP)	Post-producción (DEPPP)	Video descalificado ⁹	Reportado (DAPPAP O)
91	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1920849224626231/	NO	NO	NO	SI	NO
92	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1920853784625775/	SI	NO	SI	NO	NO
93	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1920945857949901/	NO	NO	SI	SI	NO
94	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1924029900974830/	SI	NO	SI	SI	NO
95	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1920948554616298/	NO	NO	SI	SI	NO
96	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1920951674615986/	SI	NO	SI	NO	NO
97	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1920958457948641/	SI	NO	SI	NO	NO
98	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1920963684614785/	NO	NO	SI	SI	NO
99	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1930118397032647/	NO	NO	NO	SI	NO
100	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1931741686870318/	SI	NO	SI	NO	NO
101	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1933108406733646/	NO	NO	SI	SI	NO
102	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1931930280184792/	NO	NO	SI	SI	NO

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/664/2018/NL

N°	Vínculo del video	Producción (DEPPP)	Calidad broadcast (DEPPP)	Post-producción (DEPPP)	Video descalificado ⁹	Reportado (DAPPAP O)
103	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1935000696544417/	NO	NO	NO	SI	NO
104	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1936641963046957/	NO	NO	SI	SI	NO
105	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1931938663517287/	NO	NO	SI	SI	NO
106	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1934981903212963/	SI	NO	SI	EXTRACTO CONFEREN CIAS/RECO RRIDOS	NO
107	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1938973352813818/	NO	NO	NO	SI	NO
108	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1934987976545689/	NO	NO	SI	SI	NO
109	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1939729819404838/	NO	NO	NO	SI	NO
110	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1940653049312515/	SI	NO	SI	NO	NO
111	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1940657079312112/	SI	NO	SI	NO	NO
112	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1940659092645244/	SI	NO	SI	NO	NO
113	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1966968410014312/	SI	NO	SI	NO	NO

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/664/2018/NL

N°	Vínculo del video	Producción (DEPPP)	Calidad broadcast (DEPPP)	Post-producción (DEPPP)	Video descalificado ⁹	Reportado (DAPPAP O)
114	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1940674782643675/	SI	NO	SI	NO	NO
115	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1940795969298223/	NO	NO	NO	SI	NO
116	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1940682005976286/	SI	NO	SI	NO	NO
117	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1940801245964362/	NO	NO	NO	SI	NO
118	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1940684585976028/	SI	NO	SI	NO	NO
119	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1940691539308666/	SI	NO	SI	NO	NO
120	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1940693462641807/	SI	NO	SI	NO	NO
121	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1940696695974817/	SI	NO	SI	NO	NO
122	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1940697965974690/	SI	NO	SI	NO	NO
123	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1940702119307608/	SI	NO	SI	NO	NO
124	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1933413103369843/	N/D	N/D	N/D	N/D	NO
125	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1934992779878542/	NO	NO	SI	SI	NO

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/664/2018/NL

N°	Vínculo del video	Producción (DEPPP)	Calidad broadcast (DEPPP)	Post-producción (DEPPP)	Video descalificado ⁹	Reportado (DAPPAP O)
126	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1942994862411667/	SI	NO	SI	NO	NO
127	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1943374492373704/	NO	NO	NO	SI	NO
128	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1930799816964505?UzpfSTUwMzE2MTAyNToxMDE1NTkyMzklNjc3MTAyNg	SI	NO	SI	SI	NO
129	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1920853784625775/	SI	NO	SI	NO	NO (el video se encuentra repetido en el escrito de queja)
130	https://www.facebook.com/fe lipedejesuscantu/videos/1894262783951542/	SI	NO	SI	NO	NO (el video se encuentra repetido en el escrito de queja)

Una vez que esta autoridad tuvo establecidos los criterios detallados en la tabla anterior, procedió a clasificar los 130 (ciento treinta) videos denunciados tomándose en cuenta tres de sus características y los elementos de análisis aportados por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas de los Partidos Políticos de la siguiente manera:

- Del universo total se observó que existen 2 (dos) videos que se encontraban repetidos en el escrito inicial de queja, siendo estos los ubicados con las referencias 54 y 130 y el 92 con el 129, quedando así, un universo fiscalizable de 128 (ciento veintiocho) videos denunciados en total.

- Del universo total fiscalizable, se omitieron aquellos videos que no se encuentran disponibles en la red social referida y que no fueron encontrados por esta autoridad para su análisis, mismos que se encuentran identificados en la tabla anterior dentro de la columna “Videos descalificados” con las siglas N/D, siendo de ellos 13 (trece), por tanto quedan un total general de 115 (ciento quince) videos para el estudio del presente apartado.
- Posteriormente de esos 115 (ciento quince) videos, se tomaron en cuenta aquellos que la Dirección de Prerrogativas determinó que se encuentran dentro del supuesto de postproducción, obteniéndose un total de 92 (noventa y dos) registros.
- Acto seguido, esta autoridad tomando en cuenta únicamente los 92 (noventa y dos) videos que cuentan con trabajo de post-producción, depuró aquellos que cuentan con rasgos de producción, mismos que causarían una erogación que benefició al candidato, resultando un total de 69 (sesenta y nueve) videos con ambas características.
- Por último, teniendo un universo de 69 (sesenta y nueve) videos, esta autoridad se dio a la tarea de separar aquellos que tienen características propias de videos publicitarios, es decir aquellos en los que es notoria una mezcla entre producción y postproducción y una fabricación expresa del video a partir de un guion establecido, en la que convergen tanto el mensaje del candidato, con otros elementos audiovisuales *exprofeso* realizados para lograr una narrativa audio visual. De esta desagregación se obtuvieron 47 (cuarenta y siete) registros, mismos que le generaron un beneficio al candidato y que derivaron de un gasto que debió ser reportado.

Ahora bien, es preciso mencionar sobre este último segmento, que la diferencia de 22 (veintidós) videos con características en las que se pudiera presumir producción y postproducción, se debe a que en la mayoría de los casos, estas acciones no serían totalmente imputables al candidato, ya que estas se desprenden videos de eventos como conferencias, extractos de programas de noticias o visitas realizadas a lugares en donde se le entrevistó de manera externa y se tomó el material audiovisual para posteriormente compartirse en su red social.

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/664/2018/NL**

Asimismo se encuentran los supuestos de videos en los cuales se expresan datos a manera de “infografías” sin que se exhiba una interacción con el entonces candidato.

A continuación se muestra un ejemplo en una impresión de pantalla de cada uno de los casos aludidos para pronta referencia:

Video derivado de Noticiero

<https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1881223478588806/>



Video derivado de conferencia

<https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1890255781018909/>



Video derivado de entrevista en recorrido

<https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1914859571891863/>



Video notoriamente grabado con teléfono móvil en recorrido

<https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1934981903212963/>



Video a manera de “infografía”

<https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1931930280184792/>



Así pues, es que esta autoridad determinó el universo de videos que debieron ser reportados por el entonces candidato por concepto de producción y post-producción de videos para redes sociales, siendo estos 47 (cuarenta y siete).

En este orden de ideas y vinculando la respuesta del oficio de la Dirección de Auditoría en donde se menciona que de la revisión al Sistema Integral de Fiscalización, se identificó el reporte de los gastos por concepto de producción de propaganda exhibida en páginas de internet en las pólizas PN1/DR-56/23/05/18 por \$387,440.00, PN2/DR-33/15/06/18 por \$387,440.00 y PN2/DR-79/ 26/06/18 por \$70,000.00 por operaciones realizadas con el proveedor Ella Marketing, S.A. de C.V.; sin embargo, el sujeto obligado omitió adjuntar las muestras consistentes en videos, por lo cual, dicha Dirección de Auditoría se encuentra imposibilitada para constatar que se trate de los videos denunciados dentro del escrito inicial de queja.

Del análisis en conjunto de la valoración de los videos y de la respuesta brindada por la Dirección de Auditoría, es que se puede concluir dentro del presente apartado, que por cuanto hace a los 47 (cuarenta y siete) videos que cuentan con las características necesarias para que se realice un gasto de producción y post-producción que le genere un beneficio al entonces candidato denunciado y al no tener evidencias de las facturas que se encuentran reportadas dentro de la contabilidad del C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, se imposibilitó a esta autoridad a vincular el gasto reportado con el denunciado.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/664/2018/NL

Es por ello, que se concluye en el presente apartado que dicho gasto no fue reportado y en consecuencia se procederá a determinar el costo para imponer una sanción por incumplir los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.

DETERMINACIÓN DEL MONTO INVOLUCRADO

Ahora bien, una vez determinado y acreditado el no reporte de **47 (cuarenta y siete) videos** con producción y post-producción que fueron exhibidos en la página de Facebook del entonces candidato a presidente municipal de la Ciudad de Monterrey por parte del Partido Acción Nacional, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado en beneficio de su candidato, se procedió a llevar a cabo la determinación del costo con base en la matriz de precios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, la cual se detalla a continuación:

Nombre del sujeto obligado	Proveedor	Núm. Factura /cotización/ID del RNP/Folio Fiscal	Entidad federativa	Concepto	Unidad de medida	Importe con IVA
Partido Revolucionario Institucional	Nemosintesis Soc. Cooperativa de R L	FB05647C-AFFC-4373-A756-196FD90C90B6	Coahuila	Spot publicitario para redes sociales	Servicio	\$2,320.00

Toda vez que no se identificó información suficiente en el estado de Nuevo León para valuar el bien requerido, y de acuerdo a las indicaciones señaladas en el artículo 27, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a calcular el ingreso per cápita por entidad federativa de conformidad a la última información publicada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), referente a PIB a precios corrientes, correspondientes al 2016, así como los datos referentes a la población provenientes de la Encuesta Intercensal 2015.

Con los datos obtenidos del INEGI, se determinó el ingreso per cápita por entidad, mediante la aplicación de la siguiente formula: $PIBpc=PIB/Población$.

Una vez obtenido los datos del ingreso per cápita, se aplicó la fórmula para crear intervalos de datos no agrupados en cuartiles, elaborando así un tabulador que muestra las diferencias menores a 17 millones de pesos, siendo éste, el dato redondeado de la diferencia mayor encontrada entre las posiciones ordenadas de los ingresos per cápita por entidad federativa.

Así pues, la segmentación de los datos en cuartiles permite identificar aquellas regiones geográficas con ingreso per cápita similar al del estado de Nuevo León como sigue:

Quintana Roo
Querétaro
Baja California Sur
Sonora
Coahuila de Zaragoza
Nuevo León
Ciudad de México
Campeche

Por tal razón se consideró para determinar el costo del bien un proveedor del estado de Coahuila de Zaragoza, siendo este de \$2,320.00 (dos mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.) por cada uno de los videos, siendo el costo total derivado de los 47 (cuarenta y siete) videos, un importe de **\$109,040.00** (ciento nueve mil cuarenta pesos 00/100 M.N.)

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en la presente Resolución se ha analizado una conducta que violenta el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a)** Tipo de infracción (acción u omisión)
- b)** Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c)** Comisión intencional o culposa de la falta.
- d)** La trascendencia de las normas transgredidas.
- e)** Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f)** La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g)** La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar gastos consistentes en cuarenta y siete videos por un monto de **\$109,040.00** (ciento nueve mil cuarenta pesos 00/100 M.N.), realizados en el periodo de campaña correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una **omisión** consistente en incumplir con su obligación de reportar los gastos realizados durante la campaña conforme a lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.¹⁰

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado omitió reportar egresos de campaña por concepto de cuarenta y siete videos por un monto de **\$109,040.00** (ciento nueve mil cuarenta pesos 00/100 M.N.), contraviniendo lo dispuesto en 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refieren las irregularidades observadas.

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León, derivado del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve, durante el periodo de campaña.

¹⁰ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia electoral.

Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.

Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente¹¹:

- Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio.
- Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
- Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado.

11 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-4/2016.

- La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
- Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y comparable.

Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, valorará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.

Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.

En ese tenor, se considera que, para efectos de determinar el valor de un bien o servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación comprobatoria.

En procedimiento de mérito, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los reportes de ingresos y egresos correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto obligado se traduce en **una falta** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos.

Partido Político	Financiamiento público actividades ordinarias 2018
Partido Acción Nacional	\$62,541,568.08

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/664/2018/NL

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para valorar la capacidad económica de los partidos políticos infractores, es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido, el doce de febrero de dos mil dieciocho el Consejo General del Instituto Electoral del estado de Nuevo León emitió el Acuerdo CG/AC-024/18 por el que se ejecutan las multas determinadas por el Instituto Nacional Electoral en diversas resoluciones, por lo cual se informan los saldos pendientes por pagar por los partidos políticos con registro en la entidad federativa, conforme a lo que a continuación se indica:

ID	PARTIDO POLÍTICO	RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD	MONTO TOTAL DE LA SANCIÓN TOTAL	MONTOS DE DEDUCCIONES REALIZADAS AL MES DE FEBRERO 2018	MONTOS POR SALDAR	TOTAL
1	Partido Acción Nacional	INE/CG11/2018	\$3,925.48	\$0.00	\$3,925.48	\$3,925.48

La sanción que ahora se impone en forma alguna afecta la capacidad económica de los sujetos obligados, toda vez que la autoridad administrativa electoral considera para ello, el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado a los sujetos obligados en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se han hecho acreedores con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago, ambos en el ejercicio en que se impone la sanción respectiva; así como el hecho consistente en la posibilidad del ente político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos.

Cabe señalar que, en el caso de las sanciones impuestas a **los partidos políticos con acreditación local considerando la capacidad económica del ente nacional**, la ejecución de las sanciones se realizará por la autoridad electoral nacional, por lo que se procederá al cobro de las sanciones conforme a los criterios establecidos por el Instituto Nacional Electoral para los efectos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ahora bien, por lo que hace a la capacidad económica de los partidos políticos que recibieron financiamiento público estatal, con la finalidad de no afectar las actividades ordinarias del mismo, el pago de las sanciones económicas que en su caso se impongan se realizará en términos del Acuerdo **INE/CG61/2017**.

Esto es, las sanciones económicas impuestas con base en la capacidad económica estatal, deberán ejecutarse por el Organismo Público Local de la entidad federativa, para lo cual dicho organismo deberá considerar, en términos de lo dispuesto en el **Lineamiento Sexto, apartado B del Acuerdo INE/CG61/2017**, lo siguiente:

- Una vez que las sanciones impuestas por la autoridad electoral nacional queden firmes, sea por determinación de la autoridad jurisdiccional correspondiente o por que las mismas no hayan sido materia de impugnación, las sanciones se harán efectivas a partir del mes siguiente en que queden firmes.
- De conformidad con lo anterior, el Organismo Público Local deberá llevar el registro de las notificaciones realizadas a los sujetos obligados en la entidad federativa correspondiente, de las sanciones impuestas con cargo al financiamiento público estatal, en los formatos que para tal efecto proporcione la Dirección Jurídica de este Instituto, en cumplimiento del artículo Transitorio PRIMERO del Acuerdo INE/CG61/2017.

El área competente de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales informará a los Organismos las sanciones que hayan quedado firmes.

Para lo anterior, la Unidad Técnica de Vinculación deberá remitir oportunamente las constancias de notificación correspondientes a la Dirección Jurídica.

- Para la ejecución de las sanciones el Organismo Público Local deberá considerar un descuento económico que no puede exceder del 25% (veinticinco por ciento) del financiamiento público mensual que reciba el instituto político en la entidad para el desarrollo de sus actividades ordinarias.

Conforme lo anterior, el Organismo Público Local fijará las sanciones a ejecutar en el mes correspondiente; considerando en todo momento, que de existir un conjunto de sanciones firmes pendientes de cobro por un importe superior al 25% del financiamiento público del partido político, éstas deberán ser cobradas conforme al orden en que quedaron firmes, en el entendido que no podrá descontarse un importe menor al equivalente al porcentaje antes mencionado; por lo que de acuerdo al monto de sanción, podrá acumular para su ejecución el número de sanciones necesarias hasta que queden completamente pagadas.

- Las sanciones impuestas y cobradas con recursos provenientes del financiamiento público estatal deberán de ser destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en términos de las disposiciones aplicables, por lo que se estará a lo establecido en el resolutivo respectivo, en términos de lo dispuesto en el Lineamiento Sexto, Apartado B, numeral 2 del Acuerdo INE/CG61/2017.
- El Organismo Público Local verificará en el plazo de 15 días hábiles siguientes a que estén firmes las sanciones impuestas a los candidatos, si los sujetos obligados realizaron el pago de forma voluntaria; para lo cual deberá atender la forma de pago que ordene la presente Resolución; para ello, dicho Organismo pondrá a disposición de los sujetos obligados las formas o procedimientos que les faciliten realizar el pago.
- Los OPLE deberán emitir un informe al corte de cada mes, que contenga las sanciones cobradas en dicho periodo, mismo que será hecho del conocimiento de la Unidad de Vinculación del Instituto, en términos de lo dispuesto en el Lineamiento Sexto, Apartado B, numeral 2 del Acuerdo INE/CG61/2017.

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos por concepto de cuarenta y siete videos, contrario a lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral; aunado a ello, que la comisión de la falta derivó de la queja que por esta vía se resuelve, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que los sujetos obligados conocían los alcances de las disposiciones legales invocadas, derivado de los emplazamientos y alegatos emitidos por la autoridad fiscalizadora durante el desahogo del procedimiento.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$109,040.00** (ciento nueve mil cuarenta pesos 00/100 M.N.).
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en

el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹²

Así pues, tomando en cuenta las particularidades anteriormente analizadas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de las ministraciones mensuales, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el Partido Acción Nacional, se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al **100% (cien por ciento)** sobre el monto involucrado **\$109,040.00** (ciento nueve mil cuarenta pesos 00/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de involucrado **\$109,040.00** (ciento nueve mil cuarenta pesos 00/100 M.N.).

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Acción Nacional** en lo individual es una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$109,040.00** (ciento nueve mil cuarenta pesos 00/100 M.N.).

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

¹² Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Apartado E ESTUDIO DEL PRESUNTO REBASE DE TOPES DE CAMPAÑA.

Ahora bien, por lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña, en primer lugar es dable mencionar que al actualizarse una de las conductas denunciadas por los argumentos vertidos a lo largo del presente proyecto, es que se deberá de analizar dentro del presente procedimiento la posibilidad de un rebase al tope de gastos de campaña; así también es dable señalar que el procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como, aquellos obtenidos o elaborados por la Unidad de Fiscalización.

Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional electoral de fecha seis de agosto de dos mil dieciocho el cual quedo registrado con la clave INE/CG1136/2018, se aprobaron las cifras finales del entonces candidato denunciado, siendo éstas las siguientes:

CARGO	CANDIDATO	TOTAL DE GASTOS DICTAMEN INE/CG1136/2018	GASTOS DERIVADOS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO	TOTAL DE GASTOS	TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA	DIFERENCIA ENTRE EL TOPE Y LOS GASTOS	PORCENTAJE DEL TOPE DE GASTOS
Presidente Municipal	Felipe de Jesús Cantú Rodríguez	\$6,187,255.99	\$109,040.00	\$6,296,295.99	\$8,410,871.90	\$2,114,575.91	74.86%

En este sentido, se desprende del cuadro anterior, que el entonces candidato a Presidente Municipal de Monterrey postulado por el Partido Acción Nacional, tuvo un gasto total al final de la fiscalización de las campañas de **\$6,187,255.99** (seis millones ciento ochenta y siete mil doscientos cincuenta y cinco pesos 99/100 M.N.), al cual se le sumaron los gastos no reportados que se desprenden del presente procedimiento, dando un nuevo total de gastos de \$6,296,295.99 (seis millones doscientos noventa y seis mil doscientos noventa y cinco pesos 99/100 M.N.).

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/664/2018/NL

Bajo esta tesitura, del análisis del presente apartado, esta autoridad electoral tiene certeza de que el sujeto denunciado no actualizó el rebase al tope de gastos de campaña del entonces candidato, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, ya que aún existe una diferencia de **\$2,114,575.91** (dos millones ciento catorce mil quinientos setenta y cinco pesos 91/100 M.N.) entre los gastos totales del entonces candidato postulado por el Partido Acción Nacional y el tope de gastos que le corresponde, por lo que no vulneraron lo establecido en **los artículos 431, numerales 1, en relación con el artículo 443, numeral 1, inciso f); 445 numeral 1 incisos e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 223, numerales 6 e) del Reglamento de Fiscalización**; declarando **infundado** el apartado de mérito.

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

A C U E R D A

PRIMERO. Se declara **infundado** el procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado en contra del Partido de Acción Nacional y su entonces candidato a Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, en los términos de los **Apartados A, B, C y E del Considerando 2** de la presente Resolución.

SEGUNDO. Se declara **fundado** el **apartado D** de la presente Resolución en contra del Partido Acción Nacional, y su otrora candidato el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, en los términos del **Considerando 2** de la presente Resolución.

TERCERO. En términos del **Considerando 2, Apartado D** de la presente Resolución se impone la siguiente sanción:

Al **Partido Acción Nacional** una reducción del **25%** (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$109,040.00** (ciento nueve mil cuarenta pesos 00/100 M.N.).

CUARTO. Infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la segunda circunscripción plurinominal, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SM-RAP-80/2018** dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente, remitiéndole para ello las constancias atinentes.

QUINTO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que por su conducto, se remita la presente Resolución, a la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al Instituto Electoral de Nuevo León y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de notificar al **C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez** a la brevedad posible; por lo que se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado.

SEXTO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral de Nuevo León, a efecto que procedan al cobro de las sanciones impuestas al Partido Acción Nacional en el ámbito local, en términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las cuales se harán efectivas a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme cada una de ellas, de conformidad con lo establecido en el **Considerando 2, Apartado D** de la presente Resolución.

SÉPTIMO. Se instruye al Instituto Electoral de Nuevo León que en términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas con base en la capacidad económica estatal, sean destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables.

OCTAVO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los artículos 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

NOVENO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:

Gracias, Secretario del Consejo. _____

Pasamos ahora al análisis, discusión y votación del Proyecto de Acuerdo, identificado en el orden del día con el número apartado 9.3 _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. _____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente. _____

En este caso, nuevamente no comparto el sentido de Proyecto de Acuerdo que se trae a consideración porque me parece que, en este caso, no estamos dando un cumplimiento a lo que nos ordene la Sala Regional Ciudad de México, porque nos ordena que revisemos un conjunto de gastos si se encuentran las pólizas que el recurrente señaló que están alojadas en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF). _____

Y lo que el Proyecto de Acuerdo señala es que en esas pólizas no hay muestras asociadas, sin embargo, si uno ingresa al Sistema Integral de Fiscalización (SIF) lo que advierte es que hay 18 videos que están asociados a esas pólizas y, sin embargo, no se señala que se haya realizado un cruce en relación con los mismos para que identificar que se destacan estos videos. _____

Esto es lo que expresamente señala el Proyecto de Acuerdo. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:

Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín._____

Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, con la adenda que se circuló, le pido que tome la votación que corresponde._____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:

Señoras y señores Consejeros Electorales se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 9.3, tomando en consideración en esta votación la adenda circulada previamente._____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables._____

8 votos._____

¿En contra?_____

2 votos._____

Aprobado por 8 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, no estando presente durante la votación la Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas), Consejero Presidente._____

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG1294/2018) Ptos. 9.3_____

INE/CG1294/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SCM-RAP-59/2018, INTERPUESTO POR EL C. JULIO CÉSAR MORENO RIVERA, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN INE/CG849/2018, RESPECTO DE LA QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN IDENTIFICADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/644/2018/CDMX

A N T E C E D E N T E S

I. Escrito de queja. El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de queja signado por el Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra de la coalición “Por la CDMX al Frente” integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como su entonces candidato a Alcalde de Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, el C. Julio César Moreno Rivera; denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos, en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018.

II. Aprobación de la Resolución. El seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó en sesión extraordinaria la Resolución **INE/CG849/2018**, respecto de la queja en materia de fiscalización identificada con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/644/2018/CDMX.

III. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el diez de agosto de dos mil dieciocho, el **C. Julio César Moreno Rivera** interpuso recurso de apelación para controvertir la parte conducente de la Resolución **INE/CG849/2018**, el cual fue recibido por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal Electoral Federal, con sede en la Ciudad de México en adelante, Sala Regional) el quince de

agosto del presente año, quedando registrado bajo el número de expediente **SCM-RAP-59/2018**.

IV. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, en sesión pública celebrada el treinta y uno de agosto del presente año, la Sala Regional resolvió el recurso de apelación referido, determinando en el resolutivo primero, lo que a continuación se transcribe:

*“ÚNICO. Se **revoca** la Resolución impugnada **para los efectos** establecidos al final de la consideración CUARTA de esta sentencia.”*

V. Derivado de lo anterior, en la ejecutoria antes citada la Sala Regional **revocó la resolución INE/CG849/2018**, para que este Consejo General emita una nueva determinación, en la que se tome en cuenta y se analice el escrito de contestación de queja y las pruebas aportadas junto con éste, así como también su escrito de alegatos; por lo que, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serán definitivas e inatacables, en consecuencia la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de mérito.

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44 numeral 1, incisos aa) y jj) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores en materia de origen, manejo y destino de los recursos de los partidos políticos.

2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones emitidas por las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso del Recurso de Apelación identificado como **SCM-RAP-59/2018**.

3. Que la Sala Regional resolvió revocar la Resolución **INE/CG849/2018**, dictada por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado en contra de la coalición “Por la CDMX al Frente” integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como su entonces candidato a Alcalde de Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, el C. Julio César Moreno Rivera, identificado con el número de expediente **INE/Q-COF-UTF/644/2018/CDMX**, a fin de dar cumplimiento a los efectos precisados en la sentencia de mérito y atender a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria.

4. Que por lo anterior y en razón del Considerando CUARTO, correspondiente al **ESTUDIO DE FONDO** realizado en el recurso de apelación identificado bajo el número de expediente **SCM-RAP-59/2018**, la Sala Regional determinó lo que a continuación se transcribe:

“(…)

CUARTO. Estudio de fondo. Una vez acreditado el cumplimiento de los presupuestos procesales y, por ende, la procedencia del recurso en cuestión, esta Sala Regional, acorde con lo previsto en el artículo 23 de la Ley de Medios, **procede a identificar y analizar los agravios** que hace valer el Actor en su demanda. Pretensión, causa de pedir y agravios.

(…)

Primero. El Actor se duele de que la Autoridad responsable lo dejó en estado de indefensión debido a que, de la Resolución impugnada, se aprecia que el veintiséis de julio fue emplazado para que contestara la queja promovida en su contra y que, a la fecha de la elaboración de dicha resolución, se menciona que no se dio respuesta al emplazamiento.

Ello, alegando que lo anterior es totalmente falso, pues aduce que el plazo de cinco días para contestar el emplazamiento venció el treinta y uno de julio, y que ese día presentó en las instalaciones de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE un escrito de contestación de la queja promovida en su contra, mediante el cual realizó diversas manifestaciones o alegaciones en su defensa y aportó pruebas de descargo para acreditar su dicho.

Con lo cual (en su concepto) se acredita la falta de cuidado de la Autoridad responsable y la violación a los principios rectores del Derecho Electoral en su perjuicio.

Segundo. *Al igual que en el numeral que antecede, el Actor se duele de que la Autoridad responsable lo dejó en estado de indefensión, debido a que también de la Resolución impugnada se aprecia que no tomó en cuenta los alegatos que formuló, mediante el escrito que presentó en las instalaciones de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, el tres de agosto, dentro del plazo de setenta y dos horas establecido precisamente para formular alegatos.*

Con lo cual (en su concepto) se acredita la falta de exhaustividad en el actuar de la Autoridad responsable para llevar a cabo la realización de la investigación de los hechos (materia de la queja).

Tercero. *El Actor alega que la Resolución impugnada adolece de incongruencia interna, aduciendo que la Autoridad responsable, por un lado, menciona que veintisiete (27) es el número de videos que presentan características de producción, imagen, audio, gráficos, post-producción y creatividad, y cuyos gastos no fueron reportados; y, por otro lado, concluye que se omitió realizar el reporte del gasto de producción y edición de treinta y ocho (38) videos.*

Con lo que (en su concepto) se evidencia la falta de cuidado y la incongruencia en la que incurrió la Autoridad responsable en la elaboración de la Resolución impugnada, "... al existir diversos errores que desvirtúan la certeza de los razonamientos vertidos en la resolución..."

En este tenor, el Actor también reclama que en la Resolución impugnada se manejan cantidades diferentes para cuantificar los gastos de los videos que supuestamente omitió reportar, manifestando que en su escrito de contestación de queja se justifica de manera puntual el gasto de todos y cada uno de los videos realizados, con las pólizas que amparan dicho gasto, que se encuentran registradas en el Sistema Integral de Fiscalización, con el número de contabilidad ID 47616.

Atento con lo anterior, el Actor (de nueva cuenta) se duele de que la Autoridad responsable omitió analizar sus escritos de contestación de la queja y de alegatos, manifestando que con ello incurrió en una falta grave, al haber aplicado sanciones a los partidos políticos (que integran la coalición que lo postuló como candidato para ocupar la alcaldía de Venustiano Carranza), carentes de sustento legal, por la supuesta realización de gastos no reportados, que se encuentran plenamente justificados en su escrito de contestación de queja, con las pruebas aportadas junto con dicho escrito.

Cuarto. *El Actor alega que la Autoridad responsable no fue exhaustiva, en virtud de que tuvo acceso al Sistema Integral de Fiscalización (como la propia autoridad lo refiere en su resolución), y que en dicho sistema se encuentran*

registradas todas y cada una de las pólizas con las que se reportaron los gastos relativos a la contratación para la realización y edición de los videos.

Quinto. *El Actor se duele de la falta de claridad por parte de la Autoridad responsable, al haber emitido su resolución.*

Ello, pues aduce que dicha autoridad, de manera genérica señala la existencia de veintisiete videos, cuyo costo de producción y edición, calculando por cada video la cantidad de \$7,037.00 (siete mil treinta y siete pesos 00/100 moneda nacional), da un total de \$189,999.00 (ciento ochenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100 moneda nacional), que deben sumarse como gastos de su campaña (como candidato a la alcaldía de Venustiano Carranza), para efectos del tope de dichos gastos, al no haber sido reportados; cuando lo cierto (según el Actor) es que dichos gastos fueron reportados con sus respectivas pólizas y facturas, al haber sido registradas en el Sistema Integral de Fiscalización, por un monto total de \$17,690.00 (diecisiete mil seiscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), como se encuentra contemplado en el informe final de gastos de su candidatura.

De ahí que (en su concepto), tanto el Actor como la coalición que lo postuló, en ningún momento vulneraron la normativa electoral en materia de fiscalización.

Atento con lo anterior, en cuanto a dos videos, señala que fueron compartidos por dos noticiarios y que éstos no produjeron gasto alguno respecto a su pre, post o producción, al tratarse de entrevistas realizadas al propio Actor por parte de esos noticieros, por invitación de éstos; y por lo que hace a veinticinco videos (el Actor) detalla el número de factura y de póliza que amparan los gastos referentes a la producción y edición de dichos videos, así como los montos correspondientes; reiterando que dichos gastos fueron reportados en su momento a la Autoridad responsable.

Por último, el Actor manifiesta que la Autoridad responsable en la Resolución impugnada no señala cuáles son los veintisiete videos a que se refiere, que no fueron registrados y que, por ello, determinó imponer una sanción.

*Precisado lo anterior, en cuanto a los agravios **primero** y **segundo** que anteceden, a través de los cuales el Actor esencialmente alega que la Autoridad responsable lo dejó en estado de indefensión, debido a que en la Resolución impugnada menciona que no dio respuesta al emplazamiento que el veintiséis de julio le fue notificado y que dicha autoridad no tomó en cuenta los alegatos que formuló mediante el escrito el tres de agosto le presentó; esta Sala Regional estima que lo planteado por el Actor resulta **fundado**, al considerar que le asiste la razón, en virtud de que sus alegaciones tienen sustento legal, como a continuación se expone:*

Sobre el particular, el Actor refiere que los días treinta y uno de julio y tres de agosto, presentó en las instalaciones de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, sendos escritos para contestar el emplazamiento de que fue objeto y para formular sus alegatos por escrito, respectivamente.

*Así también, para acreditar su dicho, conforme a lo establecido en el artículo 15 párrafo 2 de la Ley de Medios, ofreció y aportó junto con su escrito de demanda, las pruebas las **documentales** consistentes en:*

1. El acuse de recibo de la citada unidad técnica de fiscalización de treinta y uno de julio y de tres de agosto de un escrito signado por el Actor mediante el cual, en el expediente INE/QCOF-UTF/644/2018/CDMX, dio respuesta al emplazamiento de mérito, y ofrece y aporta diversas pruebas de descargo (visibles a fojas 28 a 334 de autos); y

2. El acuse de recibo de la aludida unidad técnica de tres de agosto de un escrito signado por el Actor por medio del cual, en el expediente INE/Q-COF-UTF/644/2018/CDMX, formuló alegatos por escrito (visible a fojas 335 a 341 de autos).

*Lo cual se corrobora con el examen de las constancias originales que integran el expediente del procedimiento de queja en materia de fiscalización INE/Q-COFUTF/644/2018/CDMX, que para efectos del medio de impugnación que se resuelve, acorde con lo establecido en el artículo 15 párrafo 1 de la Ley de Medios, su contenido para esta Sala Regional es un **hecho notorio**, al así constar en los autos del recurso de apelación SCM-RAP-55/2018, promovido por el Partido de la Revolución Democrática en contra de la misma Resolución impugnada.*

*En efecto, ya que con la adminiculación y vinculación entre sí de las **documentales públicas** aportadas por el Actor y de las constancias que integran el expediente en comento, a las que procede otorgarles valor probatorio pleno, acorde con lo establecido en los numerales 14 párrafos 1 incisos b) y e), y 4 inciso b); y 16 párrafos 1 a 3 de la Ley de Medios, al tratarse de acuses de recibo suscritos por funcionarios electorales dentro del ámbito de su competencia y de la **instrumental de actuaciones**, consistente precisamente en las constancias originales del expediente del procedimiento de queja en materia de fiscalización en comento, llevado a cabo ante la Autoridad responsable, y cuya autenticidad o la veracidad de los hechos a que se refieren no se contradice con alguna otra prueba que prueba que en obre en autos ni tampoco fue objetada; se evidencia lo siguiente:*

1. Que el veintidós de julio, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE acordó que se notificara y emplazara al Actor para que en un plazo de cinco días contestara la queja en materia de fiscalización promovida en su contra y aportara pruebas de descargo (visible a foja 2065 del citado expediente).

2. Que el veintidós de julio, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE también acordó que se notificara al Actor que tenía un plazo de setenta y dos horas para formular sus alegatos, contadas a partir de que venciera el término para contestar la queja (visible a foja 2069 del citado expediente).

3. Que el veintiséis de julio, mediante el oficio INE/UTF/DRN/40364/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE notificó al Actor el emplazamiento en comento y el plazo para formular alegatos (visible a foja 2817 del citado expediente).

4. Que el plazo de **cinco días** para contestar la queja transcurrió del veintisiete al treinta y uno de julio, y el plazo de **setenta y dos horas** para formular alegatos transcurrió de las cero horas con cero minutos del (00:00 am) del primero de agosto, a las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos (11:59 pm) del tres de agosto.

5. Que el treinta y uno de julio, el Actor presentó ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE un escrito firmado por él mismo en dicha fecha, mediante el cual dio contestación a la queja promovida en su contra, aportando diversas pruebas de descargo (visibles a fojas 3483 a 3764 del citado expediente).

6. Que el dos de agosto, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE **acordó el cierre de instrucción** del procedimiento en cuestión (visible a foja 3786 del citado expediente).

7. Que el tres de agosto, a las dieciocho horas con cincuenta y dos minutos (6:52 pm), el Actor presentó ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE un escrito firmado por él mismo en dicha fecha, mediante el cual dio formuló alegatos por escrito (visible a fojas _qq_ del citado expediente).

Atento con lo anterior, tal y como el Actor lo aduce en su escrito recursal, se advierte que efectivamente presentó ante la Autoridad responsable dos escritos, uno con el cual dio contestación a la queja instaurada en su contra, alegando en su defensa lo que estimó conducente y aportando junto con dicho escrito pruebas de descargo, y **otro** a través del cual formuló sus alegatos por escrito; y que dichos escritos fueron presentadas en forma oportuna, dentro de los plazos días establecidos para ello.

Así también, se evidencia que la Autoridad responsable acordó el cierre de la instrucción del procedimiento, **omitiendo** acordar respecto a la presentación de los escritos del Actor.

Atento con lo anterior, se aprecia que la Autoridad responsable indebida o incorrectamente el dos de agosto acordó cerrar la instrucción, cuando aún estaba transcurriendo y antes de que hubiese concluido el plazo de setenta y dos horas para formular alegatos. Ello, en franca violación al **derecho de audiencia** del Actor, reconocido en el artículo 14 párrafo segundo de la Constitución.

(...)

De igual forma, de la lectura del considerando **2** de la Resolución impugnada, referente al **estudio de fondo**, en particular del apartado señalado con la letra **D**, intitulado: **conceptos no reportados en el SIF** (Sistema Integral de Fiscalización), en el que la Autoridad responsable determinó tener por acreditado que el Actor omitió realizar el reporte de gastos de producción y edición de los videos en cuestión; tal y como éste lo alega en su escrito recursal, se aprecia que la responsable efectivamente **omitió tomar en cuenta y analizar** el escrito de contestación de queja y las pruebas aportadas junto con éste, así como también su escrito de alegatos, **y pronunciarse al respecto**.

Lo anterior, como se señala, en violación del **derecho de audiencia** del Actor, reconocido en el artículo 14 párrafo segundo de la Constitución, al tenor siguiente:

Artículo 14. ...

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. ...

Como se puede apreciar, en lo que interesa, el texto constitucional esencialmente dispone que nadie puede ser privado de sus derechos, sino mediante un proceso o procedimiento seguido en forma de juicio ante las autoridades u órganos facultados para emitir actos materialmente jurisdiccionales, en el que se cumplan las **formalidades esenciales del procedimiento**, conforme a las normas legales expedidas con anterioridad al hecho, como lo es el procedimiento de queja en materia de fiscalización INE/Q-COFUTF/644/2018/CDMX, instaurado en contra del Actor.

En efecto, en primer término, es necesario precisar que el **derecho de audiencia** reconocido en la Constitución no exige la necesaria intervención de una autoridad jurisdiccional, ni de un procedimiento judicial. Habida cuenta que los vocablos “juicio” y “tribunales previamente establecidos”, contenidos en el aludido texto de la Constitución, que refieren al **derecho de audiencia**, no deben interpretarse literalmente, en el sentido de que todo acto privativo de derechos debe ser necesariamente emitido por una autoridad jurisdiccional, previa instauración de una secuencia de actos dotados de las características ordinarias de un procedimiento judicial, sino como el mandato jurídico para que toda autoridad competente legalmente para emitir actos que puedan tener como consecuencia la privación de bienes o derechos, tiene la obligación de respetar el **derecho de audiencia**, mediante la concesión al posible agraviado de la oportunidad de conocer sobre la materia del asunto, probar en su favor y asumir alguna posición en lo que a su interés convenga.

Ahora bien, en cuanto a que se cumplan las **formalidades esenciales del procedimiento**, debe señalarse que el **derecho de audiencia** (que es uno de los requisitos del llamado **debido proceso**), precisamente se trata de una de esas **formalidades**, que se debe garantizar antes de la emisión de todo **acto privativo de autoridad**.

Por ello, para cualquier acto que pudiera traer como consecuencia la imposición de una sanción (como acontece con el dictado de la Resolución impugnada), ocurre que **la autoridad debe garantizar al probable afectado** (en el caso el Actor) **el ser escuchado con la debida oportunidad**, aunque la normativa adjetiva aplicable no lo establezca, justamente al así ordenarlo en artículo 14 párrafo segundo de la Constitución, en cumplimiento del **derecho de audiencia**.

De ahí que sea válido colegir que dentro del procedimiento de fiscalización (instaurado en contra del Actor), la Autoridad responsable está obligada a observar el **derecho de audiencia** que (como se aduce) consiste en el derecho de toda persona a que previo a la emisión de cualquier acto de autoridad que pueda restringir o privarla del ejercicio de sus derechos o posesiones, se le otorgue la oportunidad de defenderse en un juicio o proceso en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento.

(...)

Habida cuenta que entre estas **formalidades esenciales del procedimiento** también se encuentra el **derecho de las partes a formular alegatos**. De tal suerte que, debe estimarse que a fin de **garantizar el derecho de defensa** y atender en su integridad la denuncia o queja planteada, la Autoridad responsable debe tomarlos en consideración al resolver el procedimiento

administrativo sancionador. Lo cual en el caso tampoco aconteció, conforme a lo anteriormente expuesto.

(...)”

5. Que, en congruencia al análisis desarrollado por el citado órgano jurisdiccional, dentro de la sentencia emitida en el expediente **SCM-RAP-59/2018**, relativo a los efectos de la sentencia, la Sala Regional determinó:

De modo que, al actualizarse las referidas violaciones al procedimiento, consistentes en las omisiones en que incurrió la Autoridad responsable, ha lugar a ordenar la reposición del procedimiento de queja en materia de fiscalización, a efecto de que la Autoridad responsable las subsane y, hecho lo anterior, en ejercicio de su competencia, continúe con el procedimiento y dicte una nueva resolución.

(...)

*De ahí que, se acredite que la Autoridad responsable actuó en forma omisa e ilegal y que le asista la razón al Actor y, por tanto, su planteamiento sea **fundado**.*

*En **conclusión**, al haber resultado **fundado** lo alegado por el Actor, acorde con lo establecido en el artículo 47 párrafo 1 de la Ley de Medios, lo **procedente** es **revocar** la Resolución impugnada, dejándola insubsistente, **y reponer el procedimiento** para el efecto de que la Autoridad responsable, dentro un plazo de **diez días naturales**, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta sentencia: **1) se pronuncie** sobre la presentación de los dos escritos del Actor, acordado su presentación en tiempo y forma, y **2) una vez cerrada la instrucción, dicte una nueva resolución**, en ejercicio y con plenitud de sus atribuciones, tomando en cuenta, analizando, pronunciando (argumentando) y resolviendo lo que estime legalmente procedente respecto a lo manifestado por el Actor en su escrito de contestación de queja y a las pruebas de descargo exhibidas junto con dicho escrito, y en su escrito de alegatos.*

(...)”

6. Que en cumplimiento a la determinación dictada por la autoridad jurisdiccional en el expediente **SCM-RAP-59/2018**, por lo que hace a la **Resolución** emitida respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado en contra de la coalición “Por la CDMX al Frente” integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y

Movimiento Ciudadano, así como su entonces candidato a Alcalde de Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, el C. Julio César Moreno Rivera, identificado con el número de expediente **INE/Q-COF-UTF/644/2018/CDMX**, este Consejo General revoca la Resolución **INE/CG849/2018**, procediendo a emitir un nuevo pronunciamiento, a efecto de restituir las garantías de audiencia y debido proceso al denunciado, para quedar en los términos siguientes:

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, INSTAURADO EN CONTRA DE LA COALICIÓN “POR LA CDMX AL FRENTE” INTEGRADA POR LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO, ASÍ COMO SU ENTONCES CANDIDATO A ALCALDE DE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL C. JULIO CÉSAR MORENO RIVERA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/644/2018/CDMX.

(...)

ANTECEDENTES

(...)

VII. Notificación de la admisión del escrito de queja, el inicio del procedimiento, emplazamiento, alegatos y solicitud de información al entonces candidato a Alcalde de Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, el C. Julio César Moreno Rivera, postulado por la coalición “Por la CDMX al Frente” integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.

a) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/40364/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó al entonces candidato a Alcalde de Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, el C. Julio César Moreno Rivera, postulado por la coalición “Por la CDMX al Frente” integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, la admisión del escrito de queja, el inicio del procedimiento administrativo sancionador de mérito, alegatos y se le emplazó para que en un plazo de cinco días naturales, contestara por escrito lo que considerara pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. De igual forma se le solicitó indicara el número de pólizas con las cuales quedaron registrados en el Sistema Integral de Fiscalización, las aportaciones y/o erogaciones realizadas por los conceptos

referidos en el escrito de queja, tales como eventos, gastos inherentes a los mismos, operativos, propaganda utilitaria, entre otros; remitiendo copias de las pólizas, así como de la documentación soporte de cada una. (Foja 2817-2818 del expediente).

b) El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el C. Julio César Moreno Rivera, dio contestación al emplazamiento formulado, mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente del mismo y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el entonces candidato. (Foja 3483-3764 del expediente)

“JULIO CESAR MORENO RIVERA, parte denunciada en el procedimientos señalados al rubro, personalidad que acredito con copia simple de mi credencial para votar con fotografía expedida a mi favor por el Instituto Nacional Electoral, señalando domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos el ubicado en Av. Canal del Norte #351, colonia ampliación Michoacana, código postal 15250 Delegación Venustiano Carranza en la Ciudad de México, así mismo autorizando para los mismos efectos a los CC. Eva Alin González Hernández, Oscar López Damacio, Arturo García Torre, Massiel Pérez Fuentes, Jorge Armando Agonizante Díaz, Daniela Adriana Camacho Hernández.

Encontrándome en tiempo y forma, por medio del presente escrito vengo a comparecer en el presente procedimiento, derivado de la Queja Electoral en Materia de Fiscalización, interpuesta en contra de mi persona y por la COALICIÓN POR LA CIUDAD DE MÉXICO AL FRENTE y en mi calidad de denunciado, por el supuesto “REBASE DE TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA”, por lo que comparezco mediante el presente, formulando en este momento escrito de contestación:

Es menester que la autoridad electoral, tome en consideración el contenido de lo vertido en el presente escrito, en virtud de que es el medio de defensa que se tiene en el presente procedimiento ante las subjetividades del impetrante. Es inobjetable la procedencia de analizar y tomar en consideración la presente contestación a dicha queja, por los razonamientos objetivos y argumentaciones legales que haré mención, señalo que es la obligación de esta autoridad, que substancia el presente proceso, que los analice y los refiera en la resolución que conforme a derecho corresponda.

Cabe robustecer el anterior criterio con la siguiente jurisprudencia que por supletoriedad es aplicable al presente asunto;

ALEGATOS. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE TOMARLOS EN CONSIDERACIÓN AL RESOLVER EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

(...)

Es menester citar integralmente en este momento procesal las consideraciones en cuanto a mis excepciones y defensas que se formulan, pues en este momento se actualiza la exhibición de PRUEBAS, con el objeto de acreditar lo dicho en este escrito de contestación de queja y en lo referente a desvirtuar las imputaciones dadas por el partido actor.

Pruebas que se agregan a mis argumentos, lo que deriva en la presentación de las mismas, haciéndolas valer de la siguiente manera en el cuerpo del presente escrito.

Cabe señalar e invocar las siguientes excepciones derivado de mis argumentaciones anteriores:

EXCEPCIONES Y DEFENSAS.

Desde luego opongo como excepciones y defensas, las siguientes:

1.- Se opone la excepción de PLUS PETITIO, ya que el actor o quejoso denuncia e invoca planteamientos de derecho que no han sido y no fueron vulnerados por mi representada, ni mucho menos por los denunciados, extremando sus pretensiones supuestos actos y omisiones, que derivan en un reclamo injustificable, inmotivado y exacerbado, pues la causa generadora de su queja es sobrevalorada por el mismo actor, actualizando la excepción procesal de la plus petitio, pues el actor señala imputaciones que van en un grado superlativo de lo que en derecho procede y no actualiza el acreditamiento de sus aseveraciones, dando lugar a una desproporción entre [o que imputa y entre lo que acredita, por lo que cabe robustecer mi dicho con el siguiente criterio jurisprudencial:

PLUS PETITIO, EXCEPCION DE.

(...)

Se acredita esta excepción con el caudal probatorio señalado en este escrito de contestación, con las pruebas señaladas y aportadas en cada uno de los anexos que se exhiben en este momento y que consisten en pruebas documentales del informe y reportes de gastos de campaña, que han sido debidamente comunicados ante el órgano de fiscalización de esta autoridad, mediante el SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN y que se encuentran en la base de datos del órgano técnico de fiscalización del Instituto Nacional Electoral y que de igual manera se aportan y agregan al presente escrito.

2.- Se opone por vía de Excepción la defensa genérica de **SINE ACTIONE AGIS**, que no es otra cosa que la simple negación del derecho ejercitado, consistente en irrigar la acreditación de hechos presuntamente violatorios a la normativa electoral y que conlleve, por la naturaleza del todo procedimiento administrativo de la autoridad electoral, a que la carga de la prueba es para la parte actora, obligando a la autoridad electoral al examen de todos y cada uno de los elementos de la acción ejercitada.

Es decir la parte actora, no le asiste el derecho a ejercitar la acción que intenta, toda vez que, no vulneró el marco normativo electoral y sus causas de pedir, se encuentran desprovistas de insuficiencias jurídicas y carecen de los motivos suficientes y necesarios para plasmar lo que en su libelo inicial o escrito difamante refieren y menos aún, NO son acreditables las presuntas violaciones que te imputan a mi representada y a los denunciados, pues no se actualizan, fas supuestas transgresiones a la normativa en referencia, MENOS SE ACTUALIZA lo que ha proferido y las aseveraciones y subjetividades que me han señalado e imputado a mí representada y al candidato denunciado por parte de la actora. Pues como se advertirá y se constata en los anexos respectivos no se dejó de cumplir con todos y cada uno de los reportes de gastos de campaña aludidos en la queja presentada por el Partido quejoso. Menos aún que con dichas actos denunciados se haya vulnerado el marco electoral que señala. Ya que como acreditaré, todos y cada uno de los gastos de campaña, han sido debidamente registrados y reportados, por lo que se adjuntan al presente escrito, sendas comprobaciones señaladas. MENOS AÚN SE ACTUALIZA EL REBASE DE TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA COMO LO VOCIFERA LA PARTE ACTORA PUES SE CUMPLIÓ CABALMENTE CON LA NORMATIVA Y CON LO AUTORIZADO D EPARTE DE LA AUTORIDAD ELECTORAL ADMINISTRATIVA LOCA EN MATERIA DE TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA.

Consecuentemente no se vulnera el marco normativo reglamentario, POR LO QUE ES VIABLE Y PROCEDENTE LA CITA Y APLICACIÓN DEL SIGUIENTE CRITERIO JURISPRUDENCIAL;

SINE ACTIONE AGIS, DEFENSA DE.

(...)

En efecto y en la especie, este criterio se encuadra perfectamente en la actitud procesal que deberá tomar el actor, por lo que solicito, que la carga de la prueba se siga conforme a los principios procesales de nuestro marco electoral vigente. Y por tanto se deberá estar actualizando e invocando el siguiente criterio:

DEMANDA, DEBE COMBATIRSE EL ACUERDO EN QUE EL JUEZ CONCEDE UN TERMINO, PARA PRESENTAR LOS DOCUMENTOS QUE SE OMITIERON ACOMPAÑAR A LA.

Y en la especie se actualiza este supuesto, subrayando y acotando que lejos de haber admitido la queja presentada por el actor, ésta debió de desecharse por ser frívola y se convierte el presente acto procesal en un acto de molestia, pues su causa de pedir se sostiene en un concepto de frivolidad, pues de lo vertido en el escrito inicial de queja, se advierte que existieron y se obviaron, causales para el desechamiento de plano de la misma, por no cubrir con el acompañamiento de los documentos, para acreditar los supuestos hechos narrados por la parte actora, que son imputables a mi persona y a los denunciados, pues los hechos no son acreditables y lo que conlleva a determinar que son sin sustento sus argumentaciones, en CUANTO AL FONDO Y FORMA, se pueden acreditar que las imputaciones son triviales y menoscaban el sistema jurídico procesal de las autoridades administrativas, al distraer con procedimientos incoados absurdamente por parte del denunciante. LO ANTERIOR ES ASÍ EN VIRTUD DE QUE ACREDITA QUE SON SE REBASO EL TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA, PERMITIDO Y MENOS AÚN SE DEJO DE OBSERVAR LA NORMATIVA ELECTORAL EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, PUES NO SE ENCUENTRA PRUEBA ALGUNA OFRECIDA POR LA ACTORA, PARA ACREDITAR SUS ASEVERACIONES Y ESTAS SON DESVIRTUADAS POR EL CAUDAL PROBATARIO QUE SE EXHIBE AGREGADO AL PRESENTE ESCRITO.

Por consecuencia jurídica y por los razonamientos expresados con anterioridad, se vuelve a actualizar la falta y negación del derecho ejercitado, lo que conlleva a actualizar el siguiente criterio jurisprudencial y solicito que se tome en consideración para mejor proveer lo que a su derecho corresponda:

SINE ACTIONE AGIS

(...)

Por lo tanto y con relación al concepto mismo de esta defensa como tal, debemos invocar el siguiente criterio, para que esta autoridad, entre al estudio minucioso de la acción intentada por la parte actora:

DEFENSAS. SINE ACTIONE AGIS

(...)

Lo que es preciso resaltar que las interpretaciones dadas por el quejoso, tienen una tendencia y línea política electoral que redundan en una hipótesis

elucubrada por la imaginación y por la irracional forma de analizar y ver los hechos acontecidos, mismos que no son proporcionados a la realidad, pues en la especie, existen una serie de candados legales y de obligaciones en la materia en la que versa la queja, que previenen actos y omisiones que tutelan la sana contienda electoral y que inhiben conductas descritas en su queja, pues se ha cumplido en su totalidad son cada uno de los reportes dados en el Sistema Integral de fiscalización por su siglas identificadas como el SIF.

Pues no basta el dicho de quien denuncia para con ello, acreditar un hecho presuntamente violatorio de la norma en referencia, sin un sistema de pruebas, que lo sustente y que lo acredite, pues en el caso concreto, dichos hechos no ocurrieron en el contexto en el que la queja se sustenta.

3.- Hago valer la excepción de Obscuridad de la queja, derivada de que la parte actora, no menciona circunstancias de modo, tiempo y lugar en su libelo inicial o escrito difamante y que den posibilidades a mi representada, por conducto del suscrito, de realizar una defensa adecuada a los intereses de la misma y de los denunciados. Por lo que se robustece mi anterior argumentación, con el siguiente criterio jurisprudencial;

DEMANDA, EXCEPCION DE OBSCURIDAD DE LA.

(...)

Es menester señalar que si bien es cierto, se encuentra en el marco jurídico procesal la acción de objetar las pruebas dadas por el aportante hoy quejoso, para acreditar los supuestos "indicios mínimos" con los que se contaron para la procedencia e inicio del procedimiento administrativo. También es cierto prevé esta figura procesal, con el objeto de desvirtuar los documentos "probatorios" que el quejoso ha aportado para acreditar el extremos de sus hechos y de sus pretensiones, por lo que en virtud de que dicha figura y análoga en el proceso penal federal y en la legislación local y federal procedimental en materia civil, es que se objetan las documentales que describiré en este apartado, señalando las condiciones y los motivos de disenso de las pruebas aportadas en el que no irrigan la claridad y menos aún la acreditación de los hechos narrados por el actor. Se realiza en este momento pues existe el criterio reiterado de analogía del momento procesal para, objetar las documentales exhibidas en la apertura del juicio, dando la posibilidad en ambas materias tanto penal o civil, de accionar este medio procesal de objetar las probanzas dadas por el actor y las recabadas por esta autoridad. Siendo el momento procesal oportuno, en el momento de la contestación de la queja, en virtud de que este proceso y su regulación, indica que la fase o periodo para objetar, se da en el momento de contestación de queja, en virtud de ello, es que se presentan de manera pormenorizada las objeciones de las probanzas aportadas por el actor en este momento procesal, pues no existe disposición alguna que lo prohíba en un sentido amplio o restringido, pues este acto procesal tiene el objetivo de

NO RECONOCER LAS PRUEBAS QUE APORTA EL QUEJOSO Y MENOS A PASAR POR ELLOS COMO VERDADEROS, DE LA MISMA MANERA SE OBJETAN EL ALCANCE Y PRETENSIÓN QUE LE PUDIERA DAR EL QUEJOSO Y ESTA AUTORIDAD, LO QUE SE ESTIMA PERTINENTE BAJO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL EN ESTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

Tal es el caso que actualiza lo vertido anteriormente, con el siguiente criterio jurisprudencial:

OBJECCIÓN DE DOCUMENTOS. ES VÁLIDA LA FORMULADA ANTES DEL TÉRMINO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 340 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

(...)

POR OTRA PARTE ES MENESTER SEÑALAR QUE, EL MOMENTO PROCESAL DE OBJETAR LAS "PRUEBAS OFRECIDAS Y EXHIBIDAS POR EL ACTOR" ES EN LA PRESENTE CONTESTACIÓN DE QUEJA, ya que el proceso administrativo electoral, tiene semejanzas con el proceso penal y en consecuencia, el proceso penal señalado en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que el momento de apertura de prueba, es el momento procesal para objetar las pruebas aportadas por el denunciante. Reiterando que los elementos de identidad entre un proceso administrativo electoral, como es el caso que nos ocupa y el proceso penal guardan similitudes entre sí, como es el caso del principio de intervención mínima para investigar los elementos que actualicen la infracción o inocencia de quien se somete a dicha intervención de la autoridad electoral, por consecuencia es procedente la admisibilidad de este acto procesal, consistente en la objeción del valor y el alcance de las pruebas aportadas entre el actor.

**PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA ELECTORAL.
PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN MÍNIMA.**

(...)

Cabe señalar que los actos y omisiones que se imputan, no son ciertos y que la verdad histórica y la verdad legal de los hechos imputables NO CONSTITUYEN UNA UNIDAD, pues su sistema de pruebas no existe y se encuentra totalmente sustentado en FALSAS INTEPRETACIONES Y SUBJETIVACIONES EN RELACIÓN A.

- Los montos que describe de cada uno de los rubros en los que erróneamente basa su queja, son desproporcionados y actualizan lo absurdo y burdo de sus argumentaciones, actualizan la frivolidad y lo

inverosímil de sus líneas discursivas y no tiene sustento sus aseveraciones en cuanto a los montos que arbitrariamente señala por cada concepto y menos aún tiene asertividad las pírricas pruebas que presenta.

- *El gasto realizado de toda la campaña electoral para esta candidatura fue reportado ante este órgano de fiscalización y se encuentra en el sistema, tal y como se acredita con los anexos que acompañan al presente escrito.*

Y se reitera que esta aseveración y afirmación que sostenemos, se encuentra vinculada a cada una de las pruebas que se aportan en el presente escrito.

Estas probanzas se objetan su valor y el alcance que pretende darle el actor, pues asevera que con dichos elementos de prueba puede acreditar el valor y costo unitario de los mismos y basa sus aseveraciones a partir de premisas falsas y fantasiosas, argumentaciones repetitivas y desprovistas de un orden lógico. Da valores irreales y es facciosa su argumentación desapartada de la realidad, lo anterior es así en virtud de que con las documentales que presento, desacreditan por completo el dicho y los hechos del actor y aún más las "pruebas" que pretende hacer valer para acreditar el motivo de sus pretensiones.

De igual manera se desacredita sus hechos y resta valor probatorio al negar los montos de cada uno de los rubros que se enumeran, pues es la misma autoridad electoral federal, la que tiene un catálogo de proveedores en el que se estima costos y precios de servicios y productos utilizados en la campaña electoral y que tienen un valor en el mercado que va acompañado, de criterios de geográficos del valor en el mercado y de las reglas de oferta y demanda de cada concepto aludido. Por lo que es procedente esta acción por la que se OBJETAN EN SU VALOR Y ALCANCE LAS MISMAS. Lo anterior tiene sustento, pues NO EXISTE UNA PRESUNCIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LOS HECHOS SEÑALADO E IMPUTADOS, NO EXISTE UNA PRUEBA CONTUNDENTE PARA ACREDITAR LO ASEVERADO POR LA ACTORA, PUES LA MISMA VA ENCAMINADA A PRETENDER SANCIONAR UN SUPUESTO REBASE DE TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA, PUES ES EVIDENTE QUE CON EL CAUDAL PROBATORIO QUE EXHIBO EN ESTE MOMENTO, NO TIENE SUSTENTO LO QUE AFIRMA EL PARTIDO DENUNCIANTE Y MENOS AÚN SE PUEDE ACREDITAR TAL VIOLACIÓN A LA NORMATIVA ELECTORAL EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, como la que se aprecia a continuación:

1.- LA PRUEBA CONSISTENTE EN LA SEÑALADA EN EL ESCRITO DE LA PARTE ACTORA, EN EL QUE SEÑALA LO SIGUIENTE:

Esta probanza se objeta su valor y el alcance que pretende darle el actor, pues asevera que con dicho medio de probanza, PRETENDE ACREDITAR UN SUPUESTO REBASE DE TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA.

Por lo que no existe ni una presunción de los hechos acontecidos, ya que no existe una prueba contundente para acreditar lo aseverado por la actora, pues la misma va encaminada a pretender sancionar una omisión de gastos de campaña, pues es evidente que con el caudal probatorio que exhibimos en este momento no tiene sustento lo que afirma el partido denunciante y menos aún se puede acreditar tal violación a la normativa electoral en materia de rebase de tope de gastos de campaña.

Se debe señalar que la queja o denuncia presentada es un claro ejemplo de una apreciación subjetiva, deseos y anhelos del actor. Lo que pretende EL ACTOR es tratar de acreditar ARTIFICIOSAMENTE, la supuesta motivación de sus pretensiones, con una pírrica línea de argumentación y no son acompañadas de un sistema de pruebas que acredite EL REBASE DE TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA de mi representada. Menos aún señala las causas de pedir el inicio del procedimiento que nos ocupa, lo que conlleva a actualizar el siguiente criterio legal:

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.

(...)

Por otra parte se debe señalar que la anemia probatoria del actor, conlleva a la inobservancia de la norma procesal elemental sustentado en el marco jurídico no solo electoral, sino en todo el sistema normativo jurídico o del campo del derecho objetivo vigente, pues quien afirma un hecho debe y se encuentra obligado a acreditarlo, lo que en términos legales se vislumbra a que no solo se arroje la carga al actor, sino a que cumpla con la obligación de probar sus hechos y su dicho, mediante un sistema probatorio basto o de indicios mínimos, con hechos no subjetivos, sino relacionados y concatenados entre sí, que conlleven a que la autoridad electoral pueda recabar una investigación sustentada y motivada y en la que de nacimiento a un ejercicio de un derecho punible. De lo anterior deriva a actualizar e invocar la aplicación y la adopción del siguiente criterio legal:

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE. –

(...)

Estas probanzas se objetan su valor y el alcance que pretende darle el actor, pues asevera que con dichos elementos de prueba puede acreditar el valor y costo unitario de los mismos y basa sus aseveraciones a partir de premisas falsas y fantasiosas, argumentaciones repetitivas y desprovistas de un orden lógico. Da valores irreales y es facciosa su argumentación desapartada de la realidad, lo anterior es así en virtud de que con las documentales que se presentan, desacreditan por completo el dicho y los hechos del actor y aún más las "pruebas" que pretende hacer valer para acreditar el motivo de sus pretensiones. De igual manera se desacredita sus hechos y resta valor probatorio al negar los montos de cada uno de los rubros que se enumeran, pues es la misma autoridad electoral, la que tiene un catálogo de proveedores en el que se estima costos y precios de servicios y productos utilizados en la campaña electoral y que tienen un valor en el mercado que va acompañado, de criterios de geográficos del valor en el mercado y de las reglas de oferta y demanda de cada concepto aludido. Por lo que es procedente esta acción por la que se OBJETAN EN SU VALOR Y ALCANCE LAS MISMAS. Lo anterior tiene sustento, pues NO EXISTE UNA PRESUNCIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LOS HECHOS SEÑALADO E IMPUTADOS, NO EXISTE UNA PRUEBA CONTUNDENTE PARA ACREDITAR LO ASEVERADO POR LA ACTORA, PUES LA MISMA VA ENCAMINADA A PRETENDER SANCIONAR UN SUPUESTO REBASE DE TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA, PUES ES EVIDENTE QUE CON EL CAUDAL PROBATORIO QUE EXHIBIMOS EN ESTE MOMENTO, NO TIENE SUSTENTO LO QUE AFIRMA EL PARTIDO DENUNCIANTE Y MENOS AÚN SE PUEDE ACREDITAR TAL VIOLACIÓN A LA NORMATIVA ELECTORAL EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN.

Es preciso señalar que de la relatoría del actor en el presente asunto se basó en manifestaciones subjetivas y carentes de sustento legal y probatorio, tal y como lo señale a continuación en el cuadro descriptivo donde señale los elementos que contiene el cuadro, así como el o los documentos con los que se comprueban. Es la irracionalidad del impetrante respecto a las irregularidades que pretende demostrar con las imágenes, videos y demás documentos que supuestamente aporta para acreditar su dicho, ya que como se ha señalado el de la voz en todo momento cumplió con la normatividad electoral respecto al Tope de Gastos de Campaña, que para el caso en concreto de la Alcaldía de Venustiano Carranza lo es por un monto de \$1,071,671.88 (Un millón setenta y un mil seiscientos setenta y un pesos 88/100 MSN) del cual fueron comprobados todos y cada uno de los gastos que realice como lo señale en la documentación aportada de mi persona y que obra en la Unidad Técnica de Fiscalización, y que fueron reportadas en su momento, y que dicha unidad cuenta con todos y cada uno de los soportes documentales y facturas expedidas para comprobar los gastos erogados en la elección.

PRUEBAS

1. *DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia simple de mi credencial para votar con fotografía, con la que acredito la personalidad con que legalmente me ostento.*
2. *DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en 103 fojas en cuanto a las copia simples de las pólizas generadas por el Sistema Integral de Fiscalización (S.I.F).*
3. *DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en las toda y cada una de las carpetas que contienen las 2064 fojas que conforman el escrito inicial de queja.*
4. *INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo que favorezca a nuestros intereses. Solicitando me sea bien recibida*
5. *PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA. Que por deducción o inducción se desprendan de todo lo actuado y que favorezca a nuestros C intereses. Solicitando me sea bien recibida.*

Por lo antes expuesto y fundado a esta autoridad electoral pido se sirva:

PRIMERO.- Tenerme por presentado en términos del presente escrito, formulando contestación de queja, excepciones y defensas, objeción de documentos y exhibiendo pruebas.

SEGUNDO.- Por ministerio de criterio jurisprudencial, la autoridad se pronuncie en referencia a las excepciones, defensas y razonamientos lógicos jurídicos que he señalado en el presente escrito al momento de formular resolución.

TERCERO.- Se tengan por objetadas las probanzas de la actora en cuanto a su valor y alcance por lo razonamiento que he referido en todos, así como se admita los medios de prueba agregados y exhibidos en el presente escrito para su consulta.

CUARTO.- Previo los tramites de ley, se emita resolución en el que no se me c encuentre responsable y se declare la inexistencia del rebase de tope de gastos de campaña.

(...)

c) El tres de agosto de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el C. Julio César Moreno Rivera, presentó sus alegatos. (Fojas 3779-3785 del expediente)

(...)

2. Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver se desprende que la litis del presente asunto consiste en determinar si la coalición “Por la CDMX al Frente” integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, el C. Julio César Moreno Rivera, omitieron reportar en el informe de campaña correspondiente lo siguiente: eventos, gastos inherentes a los mismos, operativos, propaganda utilitaria, entre otros, y en consecuencia, el supuesto rebase al tope de gastos de campaña. En consecuencia, debe determinarse si el Partido Revolucionario Institucional y el entonces candidato antes referidos, incumplieron con lo dispuesto en los artículos 243, numeral 1 y 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 25, numeral 1, inciso a), 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral 1, 127 y 143 bis del Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben a continuación:

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

“Artículo 243.

*1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.
(...)”*

“Artículo 443.

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:

*f) Exceder los topes de gastos de campaña;
(...)”*

Ley General de Partidos Políticos

“Artículo 25. 1. Son obligaciones de los Partidos Políticos:

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;

“Artículo 79.

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:

b) Informes de Campaña:

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;

(...)”

Reglamento de Fiscalización

“Artículo 96.

Control de los ingresos

1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento.”

“Artículo 127.

Documentación de los egresos

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.

2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.

3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.”
(...)”

“Artículo 143 bis.

Control de agenda de eventos políticos.

1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo.

2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán reportar dicha cancelación en el Sistema de Contabilidad en Línea, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.”

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña sujetos a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para las campañas electorales de sus entonces candidatos, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

Conviene precisar que, dentro de los procedimientos de revisión de informes de fiscalización, los sujetos obligados se encuentran obligados a realizar el registro de la totalidad de los eventos realizados dentro del Sistema Integral de Fiscalización. En el caso de los eventos registrados en la agenda, los sujetos obligados deben identificar cada evento con la documentación comprobatoria de los gastos, proporcionando a detalle los datos de la operación. Ello es así, ya que los sujetos obligados son responsables de la información reportada en el Sistema de Contabilidad en Línea.

En términos de lo establecido en los preceptos antes señalados, los sujetos obligados tienen la obligación de registrar en la agenda de eventos políticos, todos y cada uno de los eventos que realice y, consecuentemente, presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el monto, destino y aplicación de los recursos involucrados; es decir, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

Asimismo, se desprende la obligación de los partidos políticos de respetar los topes de gastos de campaña establecidos por el Consejo General, ya que esto permite que la contienda electoral se desarrolle con apego a lo establecido por la Ley, lo cual se verá reflejado en una contienda desarrollada en condiciones de equidad

financiera, pues todos los institutos políticos estarán actuando dentro del marco legal.

Ahora bien, los referidos preceptos normativos tutelan los principios rectores de la fiscalización, tales como son la certeza, equidad, transparencia en la rendición de cuentas e imparcialidad, pues los institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad, pues su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral.

En razón de lo anterior, es deber de los institutos políticos registrar contablemente la totalidad de los egresos que realicen pues ello permite al órgano fiscalizador verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas.

De igual forma, se establece la obligación de cumplir con los topes asignados para la etapa de campaña, pues en caso de no cumplir con dicha obligación encomendada en la norma, se estaría impidiendo el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales, pues la omisión a cumplir con lo mandado sería una transgresión directa a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido político una sanción por la infracción cometida.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el registro contable de los egresos y los topes de gastos de campaña establecidos, es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por objeto y/o resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el Proceso Electoral.

Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e inicie en forma directa sobre el Estado.

En este sentido los artículos 443, numeral 1, inciso f) en relación al 243, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y el 127 del Reglamento de Fiscalización, se desprenden las obligaciones de los sujetos obligados de registrar contablemente la totalidad de los egresos realizados y de respetar el tope de gasto de campaña determinado por la autoridad electoral, toda vez que dicho régimen y limitante, respectivamente, permiten que la contienda electoral se desarrolle con estricto apego a lo establecido en la normatividad electoral, generando que la misma se desarrolle en condiciones de legalidad y equidad, pues todos los entes obligados se encuentran sujetos a que su actuación se realice dentro del marco legal.

Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.

Es decir, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de gastos no reportados y, consecuentemente, dicho gasto pueda representar un rebase de tope de gastos de campaña realizados por los institutos políticos, se encontrará en contravención a lo establecido en la normativa electoral, resultando indudable el incumplimiento a la misma.

Para tener certeza de que los partidos políticos y coaliciones cumplen con la obligación antes citada, se instauró todo un sistema y procedimiento jurídico para conocer tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los partidos y coaliciones políticas; de esta manera, dichos entes tienen la obligación de reportar ante esta autoridad electoral todos y cada uno de los gastos erogados por concepto de la actividad antes indicada.

Lo anterior, con la finalidad de proteger el bien jurídico tutelado por la norma que son los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas y, mediante la obligación de reportar en los informes de campaña respecto del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, especificando los gastos que se realicen.

Ahora bien, a efecto de efectuar un pronunciamiento individualizado, este Consejo General por cuestiones de método analizará los hechos denunciados en los siguientes apartados.

A. Conceptos reportados en el SIF.

B. Conceptos de los que no se acredita la existencia de los hechos denunciados.

C. Conceptos que no son susceptibles de ser considerados gastos de campaña.

D. Gastos no reportados.

A. Conceptos reportados en el SIF.

El quejoso denuncia que derivado de los actos de campaña del C. Julio César Moreno Rivera, otrora candidato a Alcalde de Venustiano Carranza, en la Ciudad de México postulado por la coalición “Por la CDMX al Frente” integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, incurrió en diversas irregularidades, adjuntando a su escrito impresiones de fotografías de las redes sociales denominadas Facebook y Twitter, así como notas periodísticas, en las cuales presuntamente se observan según su dicho, eventos en los que participó el entonces candidato denunciado, así como la existencia de propaganda a su favor la cual no fue reportada en el informe de campaña correspondiente.

Es menester señalar que, las pruebas consistentes en fotografías y videos, ofrecidas por el quejoso, constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de adminicularse con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto su valor es indiciario.

Así las cosas, del análisis al escrito de queja, se advierte que no contenía información precisa de la ubicación de los conceptos referidos, ni tampoco elementos temporales que permitieran a esta autoridad tener certeza que los gastos denunciados fueron efectivamente entregados en el marco de la campaña, tampoco era posible mediante las solas direcciones electrónicas proporcionadas, acreditarse un gasto o una infracción en materia de fiscalización, puesto que en las mismas no

se advertía información mínima para acreditar los lugares en los que se encontraba la propaganda.

De este modo, la autoridad instructora procedió a requerir al quejoso proporcionara circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como mayores elementos de prueba que sustentaran sus aseveraciones; asimismo relacionara cada una de las pruebas aportadas, con cada uno de los hechos narrados en su escrito inicial de queja, si embargo de la contestación realizada por el partido Morena no se desprenden mayores elementos que hagan verosímil la relación entre hechos y pruebas.

No obstante, la Unidad Técnica de Fiscalización llevó a cabo diversas diligencias con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción a partir de los indicios aportados con la queja, entre las que destaca por un lado, el requerimiento a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para realizar la certificación de las ligas electrónicas proporcionadas por el quejoso, razones y constancias realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización de la existencia de los perfiles de Facebook y Twitter, de los que se obtuvieron las imágenes, así como la descarga de las mismas y la solicitud a la Dirección Ejecutivas de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto para determinar si los videos contenidos en las direcciones electrónicas proporcionadas por el quejoso se deben considerar como gasto de producción.

Por otro lado, se realizó la consulta de las direcciones electrónicas que proporcionó el quejoso, en la que se apreció la existencia de las probanzas técnica de referencia, sin que se obtuvieran los datos de ubicación de la colocación de la propaganda o de la celebración de los eventos.

En ese mismo sentido, entre las diligencias que la Unidad realizó y las pruebas aportadas por el entonces candidato a Alcalde de Venustiano Carranza, en la Ciudad de México postulado por la coalición “Por la CDMX al Frente”, el C. Julio César Moreno Rivera, para dotar de certeza y en aras de agotar el principio de exhaustividad, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización a efecto de comprobar los gastos de la cuenta concentradora de la coalición “Por la CDMX Al Frente”, así como del entonces candidato incoado, se consultó el Sistema Integral de Fiscalización, de lo anterior se obtuvieron los siguientes resultados:

Contabilidad ID 47616 correspondiente al entonces candidato a Alcalde de Venustiano Carranza, en la Ciudad de México postulado por la coalición “Por la CDMX al Frente”, el C. Julio César Moreno Rivera.

Conceptos Denunciados	Póliza	Periodo	Tipo-Subtipo	Concepto	Documentación Soporte	Unidades	Valor
Banderas PRD	2	1	NORMAL -DIARIO	PROVISION FACT 1101 DESARROLLO PUBLICITARIO ANDUAGA SA DE CV BANDERAS GENERICAS	FACTURA	3,000.00	\$168,200.00
	4	2	NORMAL - EGRESOS	T 14 PAGO FACTURA 416 ANDRES EDUARDO TORRES OLVERA GASTOS DE PROPAGANDA	FACTURA, ARCHIVO XML, MUESTRA FOTOGRAFICA, CONTRATO, ENTRADA DE ALMACÉN,	50	\$850.00
	7	1	NORMAL -DIARIO	PROVISION FACT 1101 DESARROLLO PUBLICITARIO ANDUAGA SA DE CV BANDERAS GENERICAS	PDF'S, TARJETA DE ALMACEN, ENTRADA DE ALMACEN, SALIDA DE ALMACEN, ENTRADA DE ALMACEN BANDERIN.	145	\$168,200.00
	24	1	NORMAL -DIARIO	PROVISION FACTURA 397 ANDRES EDUARDO TORRES OLVERA PUBLICIDAD	FACTURA, XML, MUESTRAS, TARJETAS DE ALMACÉN, MUESTRAS.	50	1000
	110	2	NORMAL -DIARIO	PROVISION FACT 26 IMAGEN Y CALIDAD DE TEXTILES SA DE CV BANDERAS	FACTURA, ARCHIVO XML, TARJETA DE ALMACEN Y SALIDAS DE ALMACEN	1,000.00	\$75,400.00
	113	2	NORMAL -DIARIO	PROVISION FACT 28 IMAGEN Y CALIDAD DE TEXTILES SA DE CV BANDERA	CEDULA DE PRORRATEO BANDERAS TU VOZ ES MI VOZ, FACTURA, ARCHIVO XML, ENTRADA DE ALMACEN, SALIDA DE ALMACEN.	1000.00	\$65,000.00
	114	2	NORMAL -DIARIO	PROVISION FACT 38 COMERCIALIZADORA ALYDA SA DE CV BANDERINES	CEDULA DE PRORRATEO BANDERINES PRD, FACTURA, ARCHIVO XML, TARJETA DE ALMACEN, SALIDA DE ALMACEN.	2,000.00	12,000.00

Conceptos Denunciados	Póliza	Periodo	Tipo-Subtipo	Concepto	Documentación Soporte	Unidades	Valor
Calcomanía	22	2	NORMAL - EGRESOS	PAGO FACTURA A 405 ANDRES EDUARDO TORRES OLVERA PROPAGANDA	FACTURA Y COMPROBANTE DE PAGO	1000	300

Conceptos Denunciados	Póliza	Periodo	Tipo-Subtipo	Concepto	Documentación Soporte	Unidades	Valor
Camisa con Logo	22	2	NORMAL - EGRESOS	PAGO FACTURA A 405 ANDRES EDUARDO TORRES OLVERA PROPAGANDA	FACTURA Y COMPROBANTE DE PAGO	1000	\$300
	17	2	NORMAL - EGRESOS	PAGO FACT A 383 ANDRES EDUARDO TORRES OLVERA PROPAGANDA	FACTURA Y COMPROBANTE DE PAGO	2	\$900.00

Conceptos Denunciados	Póliza	Período	Tipo-Subtipo	Concepto	Documentación Soporte	Unidades	Valor
Gorra	4	2	NORMAL-EGRESOS	T 14 PAGO FACTURA 416 ANDRES EDUARDO TORRES OLVERA GASTOS DE PROPAGANDA	FACTURA, ARCHIVO XML, MUESTRA FOTOGRAFICA, CONTRATO, ENTRADA DE ALMACÉN,	100	3,700.00

Conceptos Denunciados	Póliza	Período	Tipo-Subtipo	Concepto	Documentación Soporte	Unidades	Valor
Lonas	10	1	NORMAL-DIARIO	PROVISION FACT A 391 ANDRES EDUARDO TORRES OLVERA PROPAGANDA UTILITARIA	KARDEX, MUESTRAS, FACTURA Y COMPROBANTE DE PAGO	200	\$20688
	6	1	NORMAL-DIARIO	PROVISION FACT A 383 ANDRES EDUARDO TORRES OLVERA PROPAGANDA	MUESTRAS, FACTURA, IFE, CONSTANCIA SAT,	214	\$23,018.84
	54	1	NORMAL-DIARIO	PROVISION FACT 2380 ASESOREN EN IMAGEN Y DISEÑO DAFRA SA DE CV PROPAGANDA ELECTORAL	PRORRATEO, FACTURA, ASRCHIVO XML, MUESTRA	214	\$23,018.84
	17	2	NORMAL-EGRESOS	PAGO FACT A 383 ANDRES EDUARDO TORRES OLVERA PROPAGANDA	FACTURA Y FIHA DE DESPÓSITO	214	\$23,018.84

Conceptos Denunciados	Póliza	Período	Tipo-Subtipo	Concepto	Documentación Soporte	Unidades	Valor
Microperforados	17	1	NORMAL-DIARIO	PROVISION FACTURA A 385 ANDRES EDUARDO TORRES OLVERA PROPAGANDA	CÉDULA DE PRORRATEO, FATURA, MUESTRAS.	200	\$5400.00

Conceptos Denunciados	Póliza	Período	Tipo-Subtipo	Concepto	Documentación Soporte	Unidades	Valor
Mochila	30	1	NORMAL-DIARIO	PROVISION FACTURA A 405 ANDRES EDUARDO TORRES OLVERA PROPAGANDA	FACTURA CON SU RSPECTIVO ARCHIVO XML, MUESTRAS Y KARDEX	70	\$5600
	22	2	NORMAL-EGRESOS	PAGO FACTURA A 405 ANDRES EDUARDO TORRES OLVERA PROPAGANDA	FACTURA Y COMPROBANTE DE PAGO	70	5600

Conceptos Denunciados	Póliza	Período	Tipo-Subtipo	Concepto	Documentación Soporte	Unidades	Valor
Paleta	30	1	NORMAL-DIARIO	PROVISION FACTURA A 405 ANDRES EDUARDO TORRES OLVERA PROPAGANDA	FACTURA CON SU RSPECTIVO ARCHIVO XML, MUESTRAS Y KARDEX	10	\$300.00
	22	2	NORMAL-EGRESOS	PAGO FACTURA A 405 ANDRES EDUARDO TORRES OLVERA PROPAGANDA	FACTURA Y COMPROBANTE DE PAGO	10	300.00

Conceptos Denunciados	Póliza	Período	Tipo-Subtipo	Concepto	Documentación Soporte	Unidades	Valor
Pulsera	30	1	NORMAL-DIARIO	PROVISION FACTURA A 405 ANDRES EDUARDO TORRES OLVERA PROPAGANDA	FACTURA CON SU RSPECTIVO ARCHIVO XML, MUESTRAS Y KARDEX	2000.00	\$1400
	22	2	NORMAL-EGRESOS	PAGO FACTURA A 405 ANDRES EDUARDO TORRES OLVERA PROPAGANDA	FACTURA Y COMPROBANTE DE PAGO	2000	1400

Conceptos Denunciados	Póliza	Período	Tipo-Subtipo	Concepto	Documentación Soporte	Unidades	Valor
Mandiles	30	1	NORMAL-DIARIO	PROVISION FACTURA A 405 ANDRES EDUARDO TORRES OLVERA PROPAGANDA	FACTURA CON SU RSPECTIVO ARCHIVO XML, MUESTRAS Y KARDEX	150	\$3000
	22	2	NORMAL-EGRESOS	PAGO FACTURA A 405 ANDRES EDUARDO TORRES OLVERA PROPAGANDA	FACTURA Y COMPROBANTE DE PAGO	150	3000

Conceptos Denunciados	Póliza	Período	Tipo-Subtipo	Concepto	Documentación Soporte	Unidades	Valor
Pancarta	17	1	NORMAL-DIARIO	PROVISION FACTURA A 385 ANDRES EDUARDO TORRES OLVERA PROPAGANDA	CÉDULA DE PRORRATEO, FATURA, MUESTRAS.	200	\$4,000.00

Conceptos Denunciados	Póliza	Período	Tipo-Subtipo	Concepto	Documentación Soporte	Unidades	Valor
Póster	23	2	NORMAL-DIARIO	PROVISION FACTURA 2419 ASESORES EN IMAGEN Y DISEÑO DAFRA SA DE CV POSTERS	PRORRATEO, FACTURA, MUESTRA Y ARCHIVO XML.	10000	\$16000

Conceptos Denunciados	Póliza	Período	Tipo-Subtipo	Concepto	Documentación Soporte	Unidades	Valor
Playeras	4	2	NORMAL - EGRESOS	T 14 PAGO FACTURA 416 ANDRES EDUARDO TORRES OLVERA GASTOS DE PROPAGANDA	FACTURA, ARCHIVO XML, MUESTRA FOTOGRAFICA, CONTRATO, ENTRADA DE ALMACÉN,	200	5,000.00
	8	2	NORMAL -DIARIO	PROVISION FACTURA A 386 ANDRES EDUARDO TORRES OLVERA PLAYERAS	FACTURA Y UN ARCHIVO XML, MUESTRAS, RPPORRATEO	1400	\$35728
	126	2	NORMAL -DIARIO	PROVISION FACTURA A 487 ANDRES EDUARDO TORRES OLVERA PLAYERAS	PRORRATEO, FACTURA, MUESTRAS	50	\$8236

Conceptos Denunciados	Póliza	Período	Tipo-Subtipo	Concepto	Documentación Soporte	Unidades	Valor
Chalecos	8	2	NORMAL -DIARIO	PROVISION FACTURA A 386 ANDRES EDUARDO TORRES OLVERA PLAYERAS	FACTURA Y UN ARCHIVO XML, MUESTRAS, RPPORRATEO	1	\$330

Conceptos Denunciados	ID	Evento	Lugar exacto del evento
Evento Arranque de campaña	5	No oneroso	Velódromo Olímpico

En relación a los gastos denunciados por concepto de producción y edición de videos, se localizaron en el Sistema Integral de Fiscalización los siguientes conceptos reportados:

Concepto Reportado	Póliza	Período	Tipo-Subtipo	Concepto	Documentación Soporte	Nombre de la muestra	Valor de la factura	Videos reportados denunciados
Edición de Videos	39	1	NORMAL -DIARIO	APORTACION SIMPATIZANTE MIGUEL ANGEL GALLEGOS EDICION DE VIDEOS	FACTURA Y UN ARCHIVO XML, TESTIGOS, CONTRATO DE DONACIÓN	Emmanuel Mendiola	\$5,220.00	1
	80	2	NORMAL -DIARIO	APORTACIÓN SIMPATIZANTE- OSCAR ROGELIO LEON RODRIGUEZ EDICION DE VIDEOS	FACTURA Y UN ARCHIVO XML, TESTIGOS, CONTRATO DE DONACIÓN	Testigo	\$2,495.76	1
	82	2	NORMAL -DIARIO	APORTACION SIMPATIZANTE GERARDO JAVIER FUENTES GALLEGOS EDICION DE VIDEOS	FACTURA Y UN ARCHIVO XML, TESTIGOS, CONTRATO DE DONACIÓN	Testigo	\$2,495.76	1

Concepto Reportado	Póliza	Periodo	Tipo-Subtipo	Concepto	Documentación Soporte	Nombre de la muestra	Valor de la factura	Videos reportados denunciados
	84	2	NORMAL-DIARIO	APORTACION DE SIMPATIZANTES GERARDO JAVIER FUENTES GALLEGOS EDICION DE VIDEOS	FACTURA Y UN ARCHIVO XML, TESTIGOS, CONTRATO DE DONACIÓN	Testigo 1 Testigo 3 Testigo 9 Testigo 10	\$3,770.00	4
TOTAL								7

Contabilidad ID 41299 correspondiente a la Concentradora de Oficinas Centrales de la coalición “Por la CDMX al Frente”

Conceptos Denunciados	Póliza	Periodo	Tipo-Subtipo	Concepto	Documentación Soporte	Unidades	Valor
Banderas PAN	880	1	NORMAL-DIARIO	TRASPASO DE BANDERAS POR KARDEX	FACTURA, MUESTRAS Y KARDEX	2500	55,100.00

Ahora bien, considerando que las pruebas aportadas por el quejoso se limitaron a imágenes de la propaganda denunciada que en diversos casos no era claro o visible el beneficio que el quejoso pretendía acreditar. Es así que del análisis de las imágenes con relación al número de unidades denunciadas por el quejoso se advirtió que se trataba del mismo objeto o propaganda tomado desde diversos ángulos, intentando acreditar un mayor número de unidades.

Lo anterior, tomando en consideración que el único elemento de prueba proporcionado por la parte quejosa fueron las fotografías aportadas en el escrito de queja y dado que éstas en muchas ocasiones no son claras y no aportan elementos externos con los cuales se pueda dar certeza de la ubicación exacta de los conceptos denunciados ni prueban que se trate de distintas situaciones y no de las mismas pero fotografiadas de distintos ángulos, no resulta posible desprender un indicio con suficiente grado de convicción respecto a la existencia de dichos conceptos, pues el hecho denunciado solo se sostiene con pruebas técnicas, que no se encuentran concatenadas con elementos probatorios adicionales que les den certeza.

Cabe mencionar que por cuanto a hace las unidades reportadas por los conceptos referidos, se advirtió que lo que reportó el partido político fue en cantidad mayor, por lo que se da cuenta de que el registro de las operaciones sí tiene efectos vinculantes respecto de lo denunciado, en virtud que esta autoridad no solo consideró la referencia al concepto, sino también las unidades involucradas de cada tipo.

Lo anterior, aunado a que el quejoso no aportó mayores elementos que pudieran llevar a esta autoridad a acreditar que se tratan de gastos de campaña no reportados; en ese sentido, se concluye que los conceptos fueron reportados en el informe de campaña correspondiente al C. Julio César Moreno Rivera, pues como ya se manifestó, el quejoso únicamente aportó pruebas técnicas como soporte a sus afirmaciones, sin embargo, no presentó algún otro elemento que permitiera vincular los hechos denunciados.

En razón de lo anterior, y respecto de los gastos enlistados en el cuadro que antecede, lo cuales fueron utilizados para promocionar al otrora candidato al cargo a Alcalde de Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, el C. Julio César Moreno Rivera, postulada por la coalición “Por la CDMX al Frente” integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, las fotografías proporcionadas por el quejoso constituyen pruebas técnicas en términos del artículo 17 del Reglamento de Procedimientos en materia de Fiscalización que, en concordancia con el artículo 21, numeral 3, del citado reglamento, al ser concatenados con las razones y constancias levantadas por el Director de la Unidad de Fiscalización respecto de la información arrojada por el Sistema Integral de Fiscalización; hacen prueba plena que los mismos fueron registrados por el denunciado en el Sistema Integral de Fiscalización en el marco de la campaña electoral referida.

Por lo tanto, y tomando en consideración que no se acredita infracción alguna en materia de fiscalización por parte de la coalición “Por la CDMX al Frente” integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como del otrora a Alcalde de Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, el C. Julio César Moreno Rivera, toda vez que se acredita el reporte de gastos denunciados ya analizados en el presente apartado, debe declararse **infundado** el procedimiento de mérito, por lo que hace al presente considerando.

B. Conceptos de los que no se acredita la existencia de los hechos denunciados.

Del análisis al escrito presentado se advierte que contenía en su mayoría argumentos jurídicos que de manera genérica refieren infracciones en materia de electoral, así como el señalamiento de manera vaga de conductas que, a juicio del quejoso, implican el rebase al límite de aportaciones de militantes y simpatizantes, omisiones de reporte derivando en el rebase al tope de gastos de campaña por parte del denunciado. Los casos en comento se citan en el Anexo 2 de esta Resolución.

Ahora bien, como se ha señalado en el capítulo de pruebas ofrecidas en el escrito de queja, el denunciante presentó de forma física en copia simple, diversas imágenes a color que, de acuerdo a la liga o link de internet, corresponden a imágenes subidas y como consecuencia de ello, difundidas, en las redes sociales denominadas “Facebook” y “Twitter”.

En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en el contenido de las imágenes, argumentado que de ellas se advierten eventos de campaña del entonces candidato y recorridos; así como, los conceptos de gasto que se observan en ellas, mismas que actualizan un rebase al tope de gastos de campaña fijado por la autoridad; por lo que el propio denunciante vincula los links o ligas de internet (Facebook y Twitter) con eventos o recorridos, así como con los conceptos de gasto que según su dicho se observan y las unidades a analizar, lo cual en conjunto pretende se cuantifique al tope en comento para actualizar el rebase de topes denunciado.

Visto lo anterior, tomando en consideración que la queja de mérito se sustenta en medios tecnológicos, lo procedente es analizar los alcances de la misma en cuanto a su valor probatorio y la determinación de los conceptos de gasto que pretende el denunciante se tomen en cuenta para su cuantificación, considerando que la autoridad se encuentra obligada a determinar los elementos cualitativos y cuantitativos materia de investigación, pues de otra forma se estaría ante una pesquisa generalizada de la autoridad electoral.

Al respecto, derivado de la naturaleza de los medios de comunicación denominados redes sociales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en diversas sentencias ha establecido criterios orientadores²¹⁷ relacionados con las redes en comento, señalando entre otras cuestiones:

- Que el internet es una red informática mundial, que trasciende como un mecanismo para que cualquier persona pueda difundir y acceder a información de su interés, y su utilización permite la descentralización extrema de la información; por ello y debido a su rápida masificación en el espacio virtual, puede reproducirse con facilidad, especialmente tratándose de redes sociales, en las que sus usuarios intercambian información y contenidos (textos,

²¹⁷ De conformidad con los criterios sostenidos al resolver los expedientes SUP-REP-168/2015 y su acumulado, SUP-REP-233/2015 y su acumulado, así como el SUP-RAP-160/2015.

imágenes, archivos, vínculos a otras páginas, entre otros), de modo que crean una comunidad virtual e interactiva.

- Que, derivado de la naturaleza de las redes sociales y las características aludidas, las publicaciones carecen de un control efectivo respecto de la autoría y de los contenidos que allí se exteriorizan.
- Que las redes sociales (como Facebook y Twitter) constituyen un espacio creado para intercambiar información entre los usuarios de esas plataformas en cualquier parte del mundo, donde además la comunicación se genera entre un gran número de usuarios que suben y bajan la información ahí difundida.
- Que atendiendo a la forma en que opera el internet, se puede colegir que existen grandes vacíos e impedimentos para que sus usuarios puedan ser identificados, así como una gran dificultad para establecer de manera fehaciente, la fuente de su creación, y, en consecuencia, ello imposibilita el poder atribuir a un ente o sujeto la responsabilidad del contenido respectivo.

En ese mismo orden de ideas, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que la Legislación Electoral mexicana vigente carece de regulación del tema relativo al uso de redes sociales; en específico, como espacios para la difusión de cualquier tipo de propaganda, ya sea electoral o gubernamental, en el contexto del desarrollo del debate político y el acceso a la información por parte de la ciudadanía²¹⁸. Así pues, mientras que algunos medios de comunicación (como la radio, la televisión y los medios impresos) tienen un marco normativo definido a nivel constitucional y legal, la situación de Internet, en específico las redes sociales carecen de un escenario de regulación normativo.

Respecto de las redes sociales (como Facebook, twitter y YouTube), ha sostenido²¹⁹ que nos encontramos ante espacios de plena libertad y con ello, se erigen como un

²¹⁸ Criterio sostenido en las sentencias identificadas con los números de expediente SRE-PSC- 268/2015 y SRE-PSC-3/2016, mediante la cual dicho órgano jurisdiccional resolvió el caso bajo un nuevo método de análisis, que parte de la naturaleza y alcances de este tipo de plataformas, en el contexto del ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión y el margen reducido de las restricciones que son susceptibles de imponerse, y no partió del contenido, temporalidad o personas involucradas, esto es, el análisis debe realizarse a partir de la naturaleza de la red social Facebook, al considerar que en un ejercicio de ponderación debe prevalecer la tutelada del ejercicio de la libertad de expresión.

²¹⁹ A partir de lo resuelto en el procedimiento especial sancionador de órgano central SRE-PSC-268/2015; así como en los expedientes SRE-PSC-268/2015, SRE-PSC-274/2015, SRE-PSC-275/2015, SRE-PSC-283/2015, SRE-PSC-284/2015, SRE-PSC-285/2015, SRE-PSC-3/2016 y SRE-PSD-520/2015 y SRE-PSD-521/2015 acumulados, estos últimos confirmados por la Sala Superior mediante sentencia dictada en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-3/2016.

mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada; consciente en la toma de decisiones públicas que trascienden al mejoramiento de la calidad de vida del pueblo; mismas que facilitan la libertad de expresión y de asociación; permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y potenciar la colaboración entre personas.

Bajo este panorama, el estudio de la naturaleza y alcances de las redes sociales, involucra derechos fundamentales de libertad de expresión y de información consagrados en el artículo sexto constitucional, toda vez que se incluye como herramienta para el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información el acceso a Internet y banda ancha. En ese sentido, el avance en las tecnologías ha generado la aparición de nuevos escenarios para la expresión de las ideas y el acceso a la información, como lo son Facebook, Twitter y YouTube.

En efecto, en Internet existen plataformas electrónicas que se han convertido en espacios virtuales en los cuales, los usuarios pueden registrarse libremente para ver y compartir diversos contenidos tales como videos, fotografías, artículos, documentos, e información en general sin que pueda identificarse por quien fueron creados originalmente, ni verificarse la veracidad de los mismos.

Por consiguiente, la información obtenida de redes sociales, es insuficiente por sí sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados, tomando en consideración que la queja de mérito refiere como circunstancias de tiempo, modo y lugar las contenidas en las redes sociales en cuestión, advirtiéndose lo siguiente:

- Tiempo, fechas en que subió la imagen.
- Modo, lo que ahí se observa. (eventos públicos, recorridos, mítines, etc.)
- Lugar, los referidos en la red social.

Adicionalmente se tiene que valorar la diferencia entre el tiempo en que se realiza la toma de una fotografía y el momento en que se publica en una red social.

Por cuanto hace a los tiempos y ubicaciones de publicación, debe establecerse que estos se encuentran definidos por el usuario de la cuenta de la red social; ello en virtud de que existe la posibilidad de una variación entre el tiempo real de la realización del acto y la ubicación de éste, en relación con la fecha y lugar en la que el acto se difundió en la red social, atendiendo a los siguientes elementos:

- Día, hora y ubicación de la realización del acto.

- Día, hora, zona horaria y ubicación del dispositivo móvil o computadora en la que se realiza la publicación.
- Día, hora, zona horaria y ubicación, en su caso de las modificaciones a la publicación primigenia.
- Día, hora y ubicación en que se compartió la publicación por parte de otro usuario desde la publicación original.

De lo anterior, se desprende que la temporalidad y ubicación de un acto no necesariamente es coincidente con la realidad histórica del momento en que se realizó el mismo; aunado a que las redes sociales permiten la alteración parcial o total del contenido de las imágenes y de la información difundida en relación a las mismas, ya sea por el usuario creador o por usuarios distintos a su autor.

Es decir, se tiene conocimiento que la fotografía digital es la imagen por excelencia de las publicaciones en las redes sociales, de tal forma que la consideramos como parte de nuestra vida cotidiana, se presenta como algo normal en nuestro día a día; sin embargo, no perdemos de vista que dichas fotografías son imágenes susceptibles de modificarse y transformar lo que se espera de ellas; lo que nos lleva al tema de la certificación.

Las imágenes difundidas en las redes sociales trastocan todo aquello relacionado con la legitimidad y veracidad, llevándonos a cuestionar y explorar las percepciones visuales insertándonos en el campo de la interpretación. La fotografía digital se centra en la interacción y la participación social, lo cual cuestiona y reinventa el propio concepto de Imagen, los márgenes de seguridad y la construcción de la identidad.

Como se observa, el quejoso hace propios los hechos que se visualizan en las redes sociales para cumplir con el supuesto establecido en el artículo 29, numeral 1, fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización y por otra parte en cuanto al caudal probatorio, relaciona la existencia de los hechos que ahí se observan, ya sea por la certificación que realiza la autoridad de la liga de internet que dirige el vínculo a la red social o por haber presentado de forma física o digital el contenido de la liga de internet relacionada, es decir, el contenido de la red social.

En este orden de ideas, con la finalidad de vincular los elementos probatorios con los hechos, sostiene que el rebase de topes se actualiza con los elementos de prueba enunciados o presentados, por lo que por su propia naturaleza se vincula con todas y cada una de las pruebas que forma parte integral del escrito de queja.

Considerando los párrafos precedentes, se puede concluir que las redes sociales son espacios de libertad y con ello, se erigen como un mecanismo de información, que facilitan la libertad de expresión y de asociación; por lo que el contenido de las redes en comento en su maximización representa la libertad individual o colectiva de manifestar ideas escritas o transmitir imágenes por dicho medio con la finalidad de obtener reacciones en general.

Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales en procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene como premisa el alcance que origina una prueba técnica²²⁰, toda vez que del contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos, los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los que se pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de prueba adicionales

Sirven para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido, en la Jurisprudencia 4/2014, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser administradas, que las puedan perfeccionar o corroborar.

Quinta Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. —Actor: Coalición integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores. —Autoridad responsable: Sala de Segunda Instancia del

²²⁰ De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización.

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. —30 de marzo de 1999. —Unanimidad de votos. —Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. —Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003. —Actor: Partido Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de México. —30 de abril de 2003. —Unanimidad de cinco votos. —Ponente: José Luis de la Peza. —Secretario: Felipe de la Mata Pizaña.

Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado. —Recurrentes: Partido Verde Ecologista de México y otro. —Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral. —21 de septiembre de 2007. —Unanimidad de seis votos. —Ponente: Constancio Carrasco Daza. —Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de dos mil catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria"

Consecuente con lo anterior, de la valoración al contenido de las redes sociales, la autoridad electoral únicamente cuenta con indicios de los hechos que se pretenden acreditar, situación que trasciende de forma directa a las circunstancias de tiempo, modo y lugar señaladas en el escrito de queja, pues la publicación de una imagen en determinada fecha no implica que la misma haga constar que un hecho aconteció en la fecha de exposición de la imagen o las características del acto que se observa como son los eventos y recorridos; así como, el número cierto y tipo de conceptos de gasto que se entregaron o en su caso si los mismos constituyen un beneficio a la campaña electoral de que se trate.

Por otra parte, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los medios de prueba que aporten los quejosos para sustentar los mismos, deben estar orientados a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir las conductas presuntamente infractoras, éstas se vinculen directamente con las circunstancias que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así como el lugar y la temporalidad en que acontecieron, mismas que deben de vincularse con los elementos de prueba que sustenten sus cada uno de los hechos descritos.

Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral se encuentre en aptitud de realizar las diligencias que considere pertinentes para en su caso, obtener elementos adicionales de prueba que le permitan determinar acreditar o desvirtuar

la pretensión del quejoso. Ello es así, en virtud de que, dada la naturaleza de los procedimientos administrativos sancionadores, como el denominado de queja en materia de fiscalización; en materia de prueba, desde el momento de la presentación de la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las pruebas o indicios pertinentes para demostrar los hechos que motivan su denuncia.

En este tenor, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su artículo 29 enlista los requisitos que toda queja debe satisfacer,²²¹ entre ellos:

“1. Toda queja deberá ser presentada por escrito y cumplir con los requisitos siguientes:

(...)

III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja o denuncia;

IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados;

V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de cualquier autoridad.

(...).”

[Énfasis añadido]

Del precepto transcrito se desprende que los denunciantes se encontraban sujetos a realizar una narración expresa y clara de todos los hechos en los que se sustenta la queja, a describir todas y cada de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se suscitaron los mismos (y en el caso que nos ocupa, las relativas a cada uno de los conceptos denunciados) y a enlazadas entre sí, de tal manera que resulte verosímil para la autoridad la versión de los hechos puestos a su consideración; así como acompañar a su escrito de queja los medios de prueba, aun aquellos de carácter indiciario que soporten sus aseveraciones; lo que resulta necesario para

²²¹ El texto del artículo pertenece a la redacción vigente al momento de la presentación de los escritos de queja; esto es, previo a las modificaciones al Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobadas por el Consejo General el 16 de diciembre de 2015.

evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa general injustificada.

En este caso, nos encontramos frente al ofrecimiento de pruebas técnicas por parte del denunciante, las cuales carecen de mayores precisiones respecto de los hechos que pretende acreditar, pues únicamente muestra la fotografía, y la mención de elementos que considera el quejoso como gasto que debió reportar el denunciado.

Así, del análisis de la totalidad de las documentales técnicas que ofrece no se advierten elementos que permitan acreditar o corroborar la certeza respecto del lugar preciso en el que se llevaron a cabo los eventos, donde supuestamente se entregó o utilizó los artículos denunciados, se limita a mencionar los objetos que se hacen presentes en las imágenes sin proporcionar un vínculo que permita relacionar los conceptos denunciados con la campaña del candidato incoado.

Esto resulta necesario, puesto que al momento en que esta autoridad realiza las diligencias, se debe conocer con la mayor precisión posible el lugar al cual dirigir la investigación. Por eso, se tiene que únicamente se proporcionaron pruebas técnicas con el escrito inicial del quejoso, las que no generan el indicio suficiente para acreditar que los eventos que denuncia se realizaron generando los gastos denunciados, por lo tanto, se tiene únicamente el indicio ya que no cuenta con los elementos que la norma exige para iniciar la investigación respecto de los conceptos analizados en el presente apartado.

C. Conceptos que no son susceptibles de ser considerados gastos de campaña.

En relación a este apartado es necesario precisar que el quejoso denuncia la existencia de diversos conceptos de gasto y aporta como prueba fotografías donde manifiesta se advierten los mismos. De este modo, la autoridad fiscalizadora con base en las facultades de vigilancia y fiscalización a efecto de comprobar los gastos del instituto político así como de la entonces candidato, recurrió a consultar el Sistema Integral de Fiscalización, no encontrando coincidencia alguna con los gastos reportados.

A continuación se analizan los conceptos denunciados que no fueron encontrados en el Sistema Integral de Fiscalización, evidencias fotográficas que integran el Anexo dos de la presente Resolución y que son copia idéntica a la presentada por el quejoso en su escrito inicial:

➤ **Asesoría en entrevista**

De los gastos denunciados, se desprende la referencia de asesoría en entrevistas como parte de imágenes donde se observa al candidato con un micrófono, al respecto el quejoso infiere que la realización de entrevistas necesariamente conlleva una asesoría y la misma debe ser objeto de acumulación al gasto realizados por el candidato, las afirmaciones del quejoso resultan insuficientes para poder acreditar el gasto referido, en virtud de que únicamente intenta avalar la realización del gasto con imágenes las cuales no mantienen vinculación con los hechos denunciados. (Fotografía 1 del Anexo 2)

➤ **Atril de metal**

Entre los gastos denunciados se advierte atril de metal, por las evidencias fotográficas, que obran en el escrito de queja se advierte que se hizo uso de un atril, durante la celebración de algunos eventos en lugares cerrados, aunque no se tiene la certeza de cuantos eventos corresponden las imágenes ya que no se advierten mayores elementos que permitan asociar el atril a los diversos eventos celebrados por el candidato. (Fotografía 2 del **Anexo 2**)

El uso de estos objetos suele obedecer a actos en los cuales un individuo debe dirigirse a un grupo de individuos, ya sea en mayor o menor escala; en ese sentido al tratarse de eventos en lugares cerrados, es decir pudiéndose tratar de salones no resulta lejana la idea que los atriles sean parte del mobiliario de los lugares donde se realizó el o los eventos. (Fotografía 3 del **Anexo 2**)

➤ **Base tripie, bastidor para escenografía, bocina subwoofer, cañón, carpa, ecualizador de sonido, equipo de iluminación, equipo de micrófono, equipo de pantalla de televisión, templete, grupo de música, mantel cubre tablón, tablón, silla acojinada, toldo, servicio de fotógrafo, vallas, agua.**

Los conceptos denunciados derivan de imágenes donde se advierte la realización de eventos en lugares cerrados, lo que puede implicar que los mismos forman parte de la decoración o elementos que se facilitan como parte del servicio de renta de salones, estos a su vez no generan un beneficio al candidato, ya que los mismos forman parte de servicios que han sido debidamente reportados en el SIF. (Fotografía 4 del Anexo 2)

➤ **Diseño de imagen, diseño de folletos, diseño de lonas, diseño de imagen en red social.**

Al respecto se señalan gastos por concepto de diseño de imagen, folletos, lonas, y red social, se entiende que, al contratar servicios de pauta de redes sociales, los mismos conllevan el diseño de las imágenes que se comparten en la red social; lo mismo ocurre con el diseño de folletos y lonas al contratar propaganda impresa éstos forman parte del servicio. (Fotografía 5 del Anexo 2)

➤ **Cartulina, balón de fútbol, ventilador, trofeo, chaleco de seguridad, sombrero tipo cazador para campaña.**

En relación a los conceptos denunciados de las imágenes que presentaron se observan los mencionados artículos, sin embargo, en éstos no se observa alguna relación con la campaña del candidato denunciado. Son elementos que forman parte del lugar en el cual se encontraba el entonces candidato denunciado. (Fotografía 7 del Anexo 2)

➤ **Danza de chinelos, grupo musical versátil, títere gigante,**

En relación a los conceptos señalados, de las imágenes que se presentaron como prueba, no es posible visualizar el concepto denunciado, estos conceptos no representarían un gasto por el otrora candidato denunciado ni habrían representado un beneficio a la campaña del entonces candidato. (Fotografía 8 del Anexo 2)

Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales en procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene como premisa el alcance que origina una prueba técnica,²²² toda vez que del contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos, los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los que se pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de prueba adicionales

Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas es de carácter imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido por lo que son insuficientes, por sí solas,

²²² De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización.

para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.

Las pruebas descritas fueron ofrecidas por el quejoso, de conformidad con el artículo 16, párrafo 3, en relación con el artículo 14, numeral 6 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, aplicable de manera supletoria de conformidad con el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización; sin embargo, carecen de valor probatorio pleno, es decir, únicamente constituyen un indicio.

Así, de conformidad con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al dictar sentencia el 5 de octubre de 2017 en el expediente SUP-RAP-184/2017, se efectuó una debida valoración de las pruebas aportadas con el escrito de queja, dado que no cuenta con algún respaldo fáctico o jurídico el alcance probatorio que el quejoso pretende dar a las fotografías y videos que integran el acervo probatorio de referencia.

Lo anterior, toda vez que las pruebas técnicas resultan insuficientes por sí mismas para acreditar los hechos que se pretenden demostrar, por la facilidad con la que pueden ser manipuladas y la dificultad de advertir cualquier posible alteración. Es por ello que en la referida sentencia se consideró correcto que la autoridad electoral haya desvirtuado la pretensión del quejoso a partir de señalar la insuficiencia del material probatorio.

En todo caso, aun de haber otorgado valor probatorio pleno a las pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso, ello de modo alguno sería suficiente para acreditar los extremos pretendidos, toda vez que lo único que podría demostrarse es que se realizaron diversos eventos, más no que se hubieran contratado los bienes y servicios que el quejoso aduce, ni que se hubieran erogado los supuestos gastos, porque de ninguna forma de las fotografías y videos sería posible advertir tal situación.

Por otra parte, cabe precisar que el procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como, aquellos obtenidos o elaborados por la Unidad de Fiscalización.

En este sentido, y tomando en consideración que no se acredita infracción alguna en materia de fiscalización por parte de la coalición “Por la CDMX al Frente” integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como del otrora a Alcalde de Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, el C. Julio César Moreno Rivera, toda vez que de las pruebas aportadas no se acredita la existencia de gastos no reportados y/o aportaciones proveniente de personas prohibidas por la normatividad electoral, debe declararse **infundado** el procedimiento de mérito, por lo que hace al presente considerando.

Ahora bien, toda vez que los gastos denunciados que fueron analizados en el **Apartado A** del presente considerando, forman parte integral de la revisión el concepto en cita, de actualizarse alguna infracción relacionada con la documentación presentada en el Sistema Integral de Fiscalización, las mismas se determinarían, de ser el caso, en el Dictamen y Resolución correspondiente.

D. Gastos no reportados.

Al respecto, del escrito de queja se desprende la denuncia por la presunta omisión en el reporte de gastos consistentes en la producción y edición de 67 videos en los cuales aparece propaganda del C. Julio César Moreno Rivera, otrora candidato a Alcalde de Venustiano Carranza, en la Ciudad de México postulado por la coalición “Por la CDMX al Frente” integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018 en la Ciudad de México.

Por lo que, a efecto que esta autoridad se allegara de mayores elementos con los cuales se pudiera determinar la existencia de producción y edición de los videos aludidos por el quejoso, esta autoridad electoral procedió a solicitar una opinión a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos a fin de determinar si de los sesenta y siete (67) videos denunciados se advertían gastos de producción y edición, considerando para ello, la calidad de la filmación de los mismos; por lo que, en respuesta a lo solicitado, dicha Dirección informó que 27 de los 67 videos presentan características tales como producción, imagen, audio, gráficos, post-producción y creatividad, de conformidad con la siguiente tabla:

RELACION DE VIDEOS	
1	A un mes de haber iniciado la campaña... - Julio César Moreno
2	Ahora que ya sabes que las mejores...-Julio César Moreno
3	Cada recorrido por las calles de...-Julio César Moreno

RELACION DE VIDEOS	
4	Como Alcalde de Venustiano Carranza y...- Julio César Moreno
5	Conoces mi plan de gobierno Agua,...- Julio César Moreno
6	Cuando el Sol Azteca gobierna en...-Julio César Moreno
7	El impulso de nuevas iniciativas como...- CED PRD Venustiano Carranza
8	En el 2006 fuimos calificados como el...- Julio César Moreno
9	El PRD en Venustiano Carranza ha...- Julio César Moreno
10	En V. Carranza, déjate contagiar por la...- Julio César Moreno
11	Este domingo acude a votar por un mejor...- Julio César Moreno
12	Julio César Moreno- Arranque de campaña en el Velódromo Olímpico
13	Julio César Moreno- Porque fue bueno, que regrese Moreno
14	Julio César Moreno added a cover Video- Julio César Moreno
15	Juntos hemos avanzado mucho y vamos por...- Julio Cesar Moreno
16	La entrega de la gente que día a día...- Julio César Moreno
17	Los resultados se ven y los hechos...- Julio César Moreno
18	Los vecinos de Venustiano Carranza han...-Julio César Moreno
19	Más de 25 mil vecinos de V. Carranza...- Julio César Moreno
20	Mi principal propuesta es la seguridad...- Julio César Moreno
21	Para que tú y tu familia puedan caminar...- Julio César Moreno
22	Porque los jóvenes apoyamos las buenas...- Rebeldes V carranza
23	Quién es Julio César Moreno...-Julio César Moreno
24	Reactivar la economía de nuestros...- Julio César Moreno
25	Una de mis prioridades para Venustiano...- Julio César Moreno
26	Uno de los ejes rectores de nuestro...- CED PRD Venustiano Carranza
27	Y a ti, Qué te gusta de la Venustiano...- Julio César Moreno

De los videos que de conformidad con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos se advierten gastos de producción y edición, siete²²³ de ellos se encuentran registrados en el Sistema Integral de Fiscalización, de conformidad con lo señalado en el **Apartado A** del presente Considerando.

Por lo que respecta a dos videos, se advirtió que los mismos tienen gastos de producción, imagen, audio y gráficos, no obstante lo anterior dichos gastos no

²²³ Los videos marcados con el número 2, 3, 4, 8, 9, 11 y 22 se encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), tal y como se expuso en el apartado A.

representan un gasto para el entonces candidato denunciado, en virtud que son reportajes realizados en el canal de noticias Milenio y Meganoticias TVC; tal y como se muestra en las siguientes imágenes:

<p>Noticiero: Milenio</p>		
<p>Noticiero: Meganoticias TVC</p>		

Continuando con la investigación, de la contestación al emplazamiento, el entonces candidato Julio César Moreno Rivera, en su escrito de contestación indica que la producción y edición de videos denunciados se encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización.

Ahora bien, mediante razón y constancia elaborada por la autoridad fiscalizadora, se hizo constar la búsqueda realizada de los conceptos mencionados en el Sistema Integral de Fiscalización, específicamente en las contabilidades con ID 47616 y 41299, correspondientes al entonces candidato a Alcalde de Venustiano Carranza, en la Ciudad de México postulado por la coalición “Por la CDMX al Frente” integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como de la cuenta concentradora de la Coalición antes referida. En dichas contabilidades se advierte el registro de las siguientes aportaciones consistentes en el servicio de edición de videos:

Concepto Reportado	Póliza	Período	Tipo-Subtipo	Concepto	Documentación Soporte	Unidades	Valor
Edición de Videos Contabilidad 47616	35	1	NORMAL-DIARIO	APORTACIÓN SIMPATIZANTE- GABRIELA FUENTES GALLEGOS EDICION DE VIDEOS	FACTURA Y UN ARCHIVO XML, MUESTRAS, RPPORRATEO	2	\$8.74
	36	1	NORMAL-DIARIO	APORTACION SIMPATIZANTE GABRIELA FUENTES GALLEGOS EDICION DE VIDEOS	FACTURA Y UN ARCHIVO XML, TESTIGOS, CONTRATO DE DONACIÓN	5	\$1,972.00
	39	1	NORMAL-DIARIO	APORTACION SIMPATIZANTE MIGUEL ANGEL GALLEGOS EDICION DE VIDEOS	FACTURA Y UN ARCHIVO XML, TESTIGOS, CONTRATO DE DONACIÓN	10	\$5,220.00
	79	2	NORMAL-DIARIO	APORTACIÓN SIMPATIZANTE- OSCAR ROGELIO LEON RODRIGUEZ EDICION DE VIDEOS	FACTURA Y UN ARCHIVO XML, TESTIGOS, CONTRATO DE DONACIÓN	10	\$2,495.76
	82	2	NORMAL-DIARIO	APORTACION SIMPATIZANTE GERARDO JAVIER FUENTES GALLEGOS EDICION DE VIDEOS	FACTURA Y UN ARCHIVO XML, TESTIGOS, CONTRATO DE DONACIÓN	2	\$2,495.76
	84	2	NORMAL-DIARIO	APORTACION DE SIMPATIZANTES GERARDO JAVIER FUENTES GALLEGOS EDICION DE VIDEOS	FACTURA Y UN ARCHIVO XML, TESTIGOS, CONTRATO DE DONACIÓN	7	\$3,770.00
Edición de Videos Contabilidad 41299	370	1	NORMAL-DIARIO	APORTACION SIMPATIZANTE GABRIELA FUENTES GALLEGOS PROPAGANDA PÁGINA DE INTERNET	FACTURA, ARCHIVO XML, ANEXO CÉDULA PRORRATEO Y CONTRATO	1	\$464.00

En consecuencia, las documentales públicas consistentes en la razón y constancia elaborada por la Unidad Técnica de Fiscalización así como el oficio de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos en términos de los artículos 20 y 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al tratarse de documentos elaborados por autoridades electorales, tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiera.

En ese sentido, al revisar la documentación soporte de cada póliza referida en el cuadro anterior, se advirtió que las muestras no corresponden con los 18 videos denunciados restantes, por lo que la autoridad sustanciadora no cuenta con elementos con los que pudiese vincular los gastos denunciados con los conceptos registrados en el Sistema Integral de Fiscalización; es decir, al no existir coincidencia en las muestras de las aportaciones, no se puede acreditar que éstas amparan la producción y post-producción de los videos materia del presente

procedimiento, sin que pase desapercibido que la existencia de los videos, así como la producción y edición de los mismos, no es un hecho controvertido por las partes.

Lo anterior se dice así, en razón que el otrora candidato incoado, basa su defensa, en que dichos conceptos se encuentran registrados en el SIF, es decir, no desconoce la existencia de éstos; sin embargo, con las pólizas referidas en el cuadro que antecede, es insuficiente para acreditar su dicho, pues se reitera que las mismas no contienen las muestras, por lo que no es posible corroborar que los videos denunciados son los mismos a los reportados.

Ahora bien, al examinar el contenido de los 18 videos se desprende que 16 son personalizados, es decir, en ellos se hace un llamamiento al voto únicamente a favor del candidato incoado, ya sea al inicio o al final de los videos; mientras que en los dos restantes, son genéricos y en estos aparece tanto el candidato denunciado, como los candidatos que se indican en el cuadro siguiente:

VIDEO		Beneficio	
A	En V. Carranza, déjate contagiar por la...- Julio César Moreno	Evelyn Parra Álvarez	Entonces Candidato a Diputada Local Distrito 10
		Edith Segura Trejo	Entonces Candidato a Diputada Federal Distrito 11
		Julio César Moreno Rivera	Entonces Candidato a Alcalde Venustiano Carranza
B	Julio César Moreno added a cover Video- Julio César Moreno	Ricardo Anaya	Entonces Candidato a Presidente de la República
		Alejandra Barrales	Entonces Candidata a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México
		Julio César Moreno Rivera	Entonces Candidato a Alcalde Venustiano Carranza

En este sentido, lo procedente es realizar el prorratio y asignarle al otrora candidato denunciado el porcentaje del gasto que le corresponde en proporción al tope de gasto de cada una de las candidaturas beneficiadas.

Resulta oportuno señalar que, para este Consejo General que el prorrateo de gastos de campaña, en los términos establecidos por el legislador y el desarrollo reglamentario, constituye un procedimiento complejo, integrado por etapas tendentes a la distribución equitativa y proporcional de los recursos empleados en las campañas electorales, a partir del beneficio obtenido por los candidatos postulados por un partido político o coalición entre los tipos de campaña de los ámbitos federal y local.

En virtud de lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado sobre el prorrateo de gastos de un acto de campaña y las condiciones para establecer las erogaciones que son susceptibles de distribuirse entre los candidatos beneficiados²²⁴, al señalar que la primera condición para establecer si las erogaciones realizadas con motivo de actos de campaña, son susceptibles de distribuirse entre los candidatos, consiste en que se trate de candidatos que correspondan a la zona geográfica donde se lleva a cabo el evento.

Luego, como elemento para determinar la existencia de beneficio a favor de una campaña, se debe considerar que los candidatos hayan participado en el evento, mediante la emisión de mensajes transmitidos por sí mismos, por terceros, o mediante la exhibición de elementos gráficos que hagan alusión a ellos.

En consecuencia, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias antes invocadas, así como el criterio establecido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para establecer las campañas beneficiadas en un acto de campaña y, en consecuencia, las erogaciones que son susceptibles de distribuirse, se debe atender a lo siguiente:

- Se entenderá por gastos genéricos de campaña, los realizados en actos de campaña y de propaganda, en los que se promueva o invite a votar por un conjunto de candidatos a cargos de elección popular que postulen, siempre y cuando no se especifique el candidato o el tipo de campaña.
- Los gastos genéricos de campaña serán prorrateados.
- Para identificar el beneficio de los candidatos, tratándose de gastos en actos de campaña, se considerará como campañas beneficiadas, únicamente

²²⁴ A través de la emisión de las sentencias identificadas como SUP-JDC-545/2017 Y ACUMULADO y SUP-RAP-207/2014 y acumulados

aquellas donde los candidatos correspondan a la zona geográfica en la que se lleva a cabo el evento, siempre y cuando hayan participado en el evento mediante la emisión de mensajes transmitidos por sí mismos, por terceros o mediante la exhibición de elementos gráficos que hagan alusión a ellos.

- En los casos de la campaña federal, si se suman más de dos candidatos a senadores o diputados que coincidan en el mismo ámbito geográfico, el porcentaje se dividirá entre los que se involucren según la campaña que corresponda.
- Cuando entre las campañas beneficiadas se encuentren candidatos cuyo ámbito geográfico sea inferior al de la entidad federativa, se entenderá como ámbito geográfico aquel de menor dimensión, es decir, el Distrito Electoral federal.
- Cuando los candidatos beneficiados sean locales y federales, primero se aplicará la distribución dispuesta en el artículo 83 de la Ley de Partidos y posteriormente la concerniente a la distribución local, es decir, el monto resultante de la determinación de la aplicación de la primera distribución, se convertirá en el 100% a distribuir para la tabla aplicable a lo local.

Por lo antes expuesto, es dable concluir que los sujetos obligados fueron omisos en reportar el egreso por el concepto de producción y edición de 18 videos, en el Informe de Campaña del otrora candidato; por lo cual deviene fundado el procedimiento en que se actúa, acreditándose que los incoados incumplieron con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.

Determinación del monto involucrado.

Ahora bien, toda vez que nos encontramos frente a una conducta infractora de la normatividad electoral (omisión de reportar gastos consistentes en la producción y edición de videos), resulta necesario determinar el valor más alto de acuerdo con la matriz de precios, con el precio más alto del concepto denunciado.

Al respecto, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, por lo que se consideró información relacionada en los registros contables presentados a través del Sistema Integral de Fiscalización por los sujetos obligados.

Realizado lo anterior, se buscaron aquellos con características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran ser comparables con los gastos no reportados.

Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de los gastos no reportados por el sujeto obligado.

En el caso concreto se localizó en la matriz de precios, el costo de cotizaciones de mercado con atributos y características similares, mismo que a continuación se describe:

Proveedor	Concepto	Costo unitario	Total de videos con Producción Semiprofesional a profesional ²²⁵	Total
JOSE MANUEL CANUL OLVERA	PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO	\$7,037.00	16	\$112,592.00

Por lo que, conforme lo antes expuesto, se tiene acreditado que la coalición “Por la CDMX al Frente” integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano y su otrora candidato a Alcalde de Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, el C. Julio César Moreno Rivera, omitieron realizar el reporte del siguiente concepto y monto:

Concepto	Costo total.
Gastos de producción y edición	\$112,592.00
TOTAL	\$112,592.00

Por lo que respecta al prorratio de los dos videos, esta autoridad procedió a realizar el prorratio correspondiente conforme a lo establecido en el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización:

Artículo 218.

Procedimiento para el prorratio del gasto conjunto o genérico

²²⁵ Conforme al oficio INE/DATE/181/2018 de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos.

1. Los gastos de campaña sujetos de prorratio, son los identificados en el artículo 29 del Reglamento.

2. Las cuentas bancarias para la administración de recursos para gastos de precampaña y campaña, deberán ser utilizadas de manera exclusiva para la recepción de ingresos y generación de pagos de la precampaña o campaña, sin incluir otro tipo de gastos.

a) Para campañas, el gasto será prorrateado entre las campañas beneficiadas, atendiendo a los criterios dispuestos en el artículo 32 del Reglamento y conforme a la tabla de distribución siguiente:

Tabla de prorratio conforme al artículo 83 de la Ley de Partidos				
INCISO	PRESIDENTE	CANDIDATO A SENADOR	CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL	CANDIDATO LOCAL
Inciso a)	40%	60%		
Inciso b)	60%		40%	
Inciso c)	20%	50%	30%	
Inciso d)	15%	35%	25%	25%
Inciso e)	40%			60%
Inciso f)	20%	60%		20%
Inciso g)	40%		35%	25%
Inciso h)		70%	30%	
Inciso i)		50%	30%	20%
Inciso j)		75%		25%
Inciso k)			50%	50%

l. En términos de lo dispuesto en el inciso l) del numeral 2 del artículo 83 de la Ley de Partidos, en los casos de campaña federal, si se suman más de dos candidatos a senadores o diputados que coincidan en el mismo ámbito geográfico, el porcentaje se dividirá entre los que se involucren según la campaña que corresponda. Este mismo supuesto será aplicable al caso de las campañas locales.

b) Para campañas locales: Tratándose de los casos, en los que se promoció a dos o más candidatos a cargos de elección popular en el ámbito local, para la distribución de los gastos de campaña se estará a lo siguiente:

l. Se deben identificar los candidatos beneficiados.

*II. Cuando los candidatos beneficiados sean locales y federales, primero se aplicará la distribución dispuesta en el artículo 83 de la Ley de Partidos y posteriormente la concerniente a la distribución local, es decir, el monto resultante de la determinación de la aplicación de la primera distribución, se convertirá en el 100% a distribuir para la tabla aplicable a lo local.
(...)”*

Por lo que respecta al prorrateo de los dos videos, los cuales de acuerdo al costo localizado en la matriz de precios cada uno de ellos representa un gasto de **\$7,037.00 (siete mil treinta y siete pesos 00/100 M.N.)**, esta autoridad procedió a realizar lo establecido al artículo 218 del Reglamento de Fiscalización.

En este sentido, en relación al **Video A** en el cual se encuentran involucrados los entonces candidatos a la Presidencia de la República y Jefe de Gobierno de la Ciudad de México por la Coalición “Por México al Frente”, el gasto que se le cuantificará al entonces candidato denunciado corresponde a **\$144.42 (ciento cuarenta y cuatro pesos 42/100 M.N.)** conforme a lo siguiente:

CANDIDATOS BENEFICIADOS artículo 218, numeral 2, fracción a), inciso e)			
ID Contabilidad	Nombre	Tope Gastos	Importe
41841	ANAYA CORTES RICARDO	\$ 429,633,325.00	\$ 2,814.80
47616	MORENO RIVERA JULIO CESAR	\$ 1,071,671.88	\$ 144.42
40988	RALES MAGDALENO MARIA ALEJAN	\$ 30,259,504.80	\$ 4,077.78
TOTAL			\$ 7,037.00

Por lo que respecta al **Video B** en el que se encuentran implicadas la entonces candidata a Diputada Federal por la Coalición “Por México al Frente” y la entonces candidata a Diputada Local por la Coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, el gasto que se le cuantificará al entonces candidato denunciado corresponde a **\$2,162.90 (dos mil ciento sesenta y dos pesos 90/100 M.N.)** conforme a lo siguiente:

CANDIDATOS BENEFICIADOS artículo 218, numeral 2, fracción a), inciso K)			
ID Contabilidad	Nombre	Tope Gastos	Importe
44229	SEGURA TREJO ELENA EDITH	\$ 1,432,111.00	\$ 3,518.50
47616	MORENO RIVERA JULIO CESAR	\$ 1,071,671.88	\$ 2,162.90
49563	PARRA ALVAREZ EVELYN	\$ 671,674.88	\$ 1,355.60
TOTAL			\$ 7,037.00

En consecuencia, toda vez que los sujetos incoados omitieron realizar el reporte del gasto de por la producción y edición de 18 videos (16 personalizados y 2 genéricos), por un monto total a **\$114,899.32**²²⁶ (ciento catorce mil ochocientos noventa y nueve pesos 32/100 M.N.); dicha conducta vulneró lo establecido por los artículos 79, numeral 1, incisos b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; el 127 del Reglamento de Fiscalización, por lo que este Consejo General declara el presente apartado como **fundado**.

En esa tesitura, por cuestión de método, la individualización de la sanción correspondiente, se realizará en el considerando 5 de la presente Resolución.

3. Capacidad Económica de los partidos integrantes de la Coalición “Por la CDMX al Frente”

Al respecto, debe considerarse que los partidos políticos sujetos al procedimiento de fiscalización que cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que, en su caso, se le imponga, toda vez que el Instituto Electoral de la Ciudad de México, mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-005/2018 les asignó como financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2018, los montos siguientes:

Partido Político	Financiamiento público actividades ordinarias 2018
Acción Nacional	\$57,248,474.97

Partido Político	Financiamiento público actividades ordinarias 2018
Partido de la Revolución Democrática	\$77,417,426.45

Partido Político	Financiamiento público actividades ordinarias 2018
Movimiento Ciudadano	\$29,420,417.54

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para valorar la capacidad económica de los partidos políticos infractores es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya

²²⁶ Resultado de la suma del monto de \$112,592.00 correspondiente a los 16 videos personalizados, y la cantidad de \$2307.32 relativa a la parte correspondiente de los 2 videos genéricos e prorrateados.

que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

Por cuanto hace al **Partido de la Revolución Democrática** al mes de septiembre de dos mil dieciocho, tiene un saldo pendiente por pagar de \$1,235,822.88 (un millón doscientos treinta y cinco mil ochocientos veintidós pesos 88/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, por tanto, estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.

En este sentido, de los archivos de la autoridad electoral se advierte que los **Partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano** al mes de septiembre de dos mil dieciocho, no tiene saldos pendientes por pagar, por lo que se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, por tanto, estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.

4. Individualización de la Sanción.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de la conducta materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes siguientes:

1. Informes del gasto ordinario:
 - a. Informes trimestrales.
 - b. Informe anual.
 - c. Informes mensuales.
2. Informes de Proceso Electoral:
 - a. Informes de precampaña.
 - b. Informes de obtención de apoyo ciudadano.
 - c. Informes de campaña.**
3. Informes presupuestales:
 - a. Programa Anual de Trabajo.
 - b. Informe de Avance Físico-Financiero.
 - c. Informe de Situación Presupuestal.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de campaña. Para tales efectos se analizará de manera separada las infracciones en que incurran.”

De lo anterior se desprende que, no obstante que el sujeto obligado haya incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad

de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.

- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos y partidos, pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.

Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos y candidatos, a continuación, se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una

infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción

para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación²²⁷:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,

²²⁷ Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la Jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i); 443, numeral 1, inciso a); 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015 y su acumulado, que los entes políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del entonces candidato no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al ente político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al entonces candidato denunciado, pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, una vez que se ha analizado la conducta que violenta los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a)** Tipo de infracción (acción u omisión)
- b)** Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c)** Comisión intencional o culposa de la falta.
- d)** La trascendencia de las normas transgredidas.
- e)** Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f)** La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g)** La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que, la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el **considerando 3** de la presente Resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los elementos para calificar las faltas (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

En relación con la irregularidad identificada en la conducta infractora, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar sus egresos realizados durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado consistente en **omitir reportar gastos realizados** durante la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.

b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron

Modo: La coalición “Por la CDMX al Frente” integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano omitió reportar en el Informe de Campaña el egreso por el concepto de producción y edición de 16 videos por un monto total de **\$114,899.32 (ciento catorce mil ochocientos noventa y nueve pesos 32/100 M.N.).**

De ahí que el partido político contravino lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.

Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió de la sustanciación del procedimiento en que se actúa.

Lugar: La irregularidad se actualizó durante el Proceso Electoral Local 2017-2018 en la Ciudad de México.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

En la conducta que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización²²⁸.

Artículos señalados de los que se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos y gastos), coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

²²⁸ “Artículo 79. 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes: b) Informes de campaña: I. I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; (...)”

“Artículo 127. 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

Ahora bien el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente²²⁹:

- Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio.
- Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
- Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
- Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación y sus componentes deberán ser comparables.
- Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de

229 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016.

cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y comparable.

Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, valorará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.

Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.

En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación comprobatoria.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación de las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la

misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por la conducta señalada es garantizar certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en **una falta de fondo**, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los sujetos obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

En la especie, debe tenerse en cuenta que, tal como se explicó en el Considerando 2 de la presente Resolución, los partidos políticos integran coalición. Por ello, es menester señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser sancionadas de manera individual tal y como lo ha sustentado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, *'COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE'*.

Es el caso, que para fijar la sanción, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, según lo establecieron en el convenio respectivo, tal y como se establece en el artículo 340 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña en el Proceso Electoral Local 2017-2018 en la Ciudad de México, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$114,899.32 (ciento catorce mil ochocientos noventa y nueve pesos 32/100 M.N.)**.
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

Por lo anterior este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquella que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las circunstancias particulares del caso.

Asimismo, la Sala Superior sostuvo en la sentencia recaída al recurso de apelación SUP-RAP-461/2012 que las faltas deben traer consigo una consecuencia suficiente para que en lo futuro, tanto individuos que conforman la sociedad en general, como el partícipe de un ilícito, no cometan nuevos y menos las mismas violaciones a la ley, pues con ello se expondría el bienestar social, como razón última del Estado de Derecho.

Esto es, la intervención Estatal debe ser lo suficientemente apta para desalentar al infractor de continuar en su oposición a la ley, ya que, de otra manera, incluso, podría contribuir al fomento de tales conductas ilícitas, y no quedaría satisfecho el propósito disuasivo que está en la naturaleza misma de las sanciones.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del sujeto obligado infractor, una amonestación pública sería poco idónea para disuadir la conducta como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción prevista en la fracción V consistente en la cancelación del registro como partido político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente político sancionado del sistema existente.

En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al partido infractor en atención a los elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al **100% (ciento por ciento)** sobre el monto involucrado que asciende a un total de **\$114,899.32 (ciento catorce mil ochocientos noventa y nueve pesos 32/100 M.N.)**.

Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponde, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado a los sujetos obligados en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se hayan hecho acreedores con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad de los entes políticos de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **considerando 3** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

En ese sentido, considerando que estamos en presencia de una infracción en el que se impondrán la sanción a los partidos que integran la Coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, de conformidad con el artículo 340, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, porcentaje que a continuación se indica:

Partido Político	Financiamiento público para gastos de campaña	Porcentaje de aportación de acuerdo al Convenio de Coalición. (Clausula 13ª)	Cantidad líquida de lo aportado por cada partido político	Porcentaje de aportación en relación al 100% de la cantidad líquida
Partido Acción Nacional	\$28,624,237.49	30%	\$8,587,271.247	38%
Partido de la Revolución Democrática	\$38,708,713.23	25%	\$9,677,178.3075	43%

Partido Político	Financiamiento público para gastos de campaña	Porcentaje de aportación de acuerdo al Convenio de Coalición. (Clausula 13ª)	Cantidad líquida de lo aportado por cada partido político	Porcentaje de aportación en relación al 100% de la cantidad líquida
Partido Movimiento Ciudadano	\$14,710,208.76	30%	\$4,413,062.628	19%

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Acción Nacional** en lo individual, lo correspondiente al **38% (treinta y ocho por ciento)** del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$43,661.74 (cuarenta y tres mil seiscientos sesenta y un pesos 74/100 M.N.)**

Asimismo, al **Partido de la Revolución Democrática** en lo individual, en lo individual se le impone lo correspondiente al **43% (cuarenta y tres por ciento)** del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$49,406.70 (cuarenta y nueve mil cuatrocientos seis pesos 70/100 M.N.)**.

En este orden de ideas, **Partido Movimiento Ciudadano** en lo individual, lo correspondiente al **19% (diecinueve por ciento)** del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$21,830.87 (veintiún mil ochocientos treinta pesos 87/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

5. Suma del monto no reportado al tope de gastos de campaña.

Por lo que hace al de tope de gastos de campaña para la elección a Alcalde de Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México, cabe precisar que el procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como, aquellos obtenidos o elaborados por la Unidad Técnica de Fiscalización.

Por lo anterior, se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización, sumar el monto de \$175,925.00 (ciento setenta y cinco mil novecientos veinticinco pesos 00/100 M.N.), al tope de gastos de campaña del C. Julio César Moreno Rivera, entonces candidato a Alcalde de Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, postulado por la coalición “Por la CDMX al Frente” integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano de conformidad con lo expuesto en el **Considerando 2** de la presente Resolución.

(...)

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se declara **infundado** el presente procedimiento administrativo sancionador electoral instaurado en contra de la coalición “Por la CDMX al Frente” integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como del C. Julio César Moreno Rivera, en los términos del **Considerando 2, Apartados a), b) y c)** de la presente Resolución.

SEGUNDO. Se declara **fundado** el presente procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de la coalición “Por la CDMX al Frente” integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como del C. Julio César Moreno Rivera, en términos del **Considerando 2, Apartado d)** de la presente Resolución.

TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el **considerando 4** en relación con el **considerando 2, Apartado d)** de la presente Resolución, se impone a los Partidos integrantes de la coalición “Por la CDMX al Frente” lo siguiente:

- Al **Partido Acción Nacional** una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$43,661.74 (cuarenta y tres mil seiscientos sesenta y un pesos 74/100 M.N.)**
- Al **Partido de la Revolución Democrática** una sanción económica consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$49,406.70 (cuarenta y nueve mil cuatrocientos seis pesos 70/100 M.N.)**.
- Al **Partido Movimiento Ciudadano** una sanción económica consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$21,830.87 (veintiún mil ochocientos treinta pesos 87/100 M.N.)**.

(...)

7. Dictamen Consolidado respecto de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Jefe de Gobierno, Diputados Locales y Alcaldes, de la Coalición por la Ciudad de México al Frente.

Que la Sala Regional resolvió revocar, la Resolución **INE/CG849/2018** en los términos referidos, sin embargo, la misma ordenó cuantificar los gastos detectados en el Dictamen Consolidado, motivo por el cual, a fin de dar cumplimiento a la sentencia de mérito, se procederá a modificar el Dictamen Consolidado, atento a lo analizado en el considerando anterior.

Por ello una vez que ha sido acreditada la existencia de 25 videos y los gastos por concepto de edición y producción de los mismos, se modifica el Anexo II y su

correspondiente Anexo II-A* del Dictamen Consolidado respecto de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Jefe de Gobierno, Diputados Locales y Alcaldes correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México, de la Coalición por la Ciudad de México al Frente, por cuanto hace a los gastos no reportados, en los siguientes términos:

Anexo II

Parte conducente a modificar:

ID CONTABILIDAD	CARGO	NOMBRE CANDIDATO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	GASTOS REPORTADOS	DETERMINADOS UTF			TOTAL DE GASTOS DETERMINADOS POR AUDITORIA	TOTAL DE GASTOS	TOPE DE GASTOS	DIFERENCIA TOPE-GASTO	% GASTOS - TOPE
					TOTAL DE GASTOS REPORTADOS	DIFERENCIA DE PRORRATEO	TOTAL DE GASTOS NO REPORTADOS (ANEXO XX)	AJUSTES DETERMINADOS UTF (AUMENTO / DISMINUCIÓN)					
47616	ALCALDE	JULIO CESAR	MORENO	RIVERA	\$ 640,407.64	\$ -	\$ 190,231.29	\$ -	\$ 190,231.29	\$ 830,638.93	\$ 1,071,671.88	\$ 241,032.95	77.51%
					\$ 52,602,157.53	\$ -	\$ 1,184,778.76	\$ -	\$ 1,184,778.76	\$ 54,383,552.78	\$ 69,924,678.72	\$ 15,541,125.94	

Para quedar de la siguiente forma:

ID CONTABILIDAD	CARGO	NOMBRE CANDIDATO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	GASTOS REPORTADOS	DETERMINADOS UTF			TOTAL DE GASTOS DETERMINADOS POR AUDITORIA	TOTAL DE GASTOS	TOPE DE GASTOS	DIFERENCIA TOPE-GASTO	% GASTOS - TOPE
					TOTAL DE GASTOS REPORTADOS	DIFERENCIA DE PRORRATEO	TOTAL DE GASTOS NO REPORTADOS (ANEXO XX)	AJUSTES DETERMINADOS UTF (AUMENTO / DISMINUCIÓN)					
47616	ALCALDE	JULIO CESAR	MORENO	RIVERA	\$ 640,407.64	\$ -	\$ 115,131.61	\$ -	\$ 115,131.61	\$ 755,539.25	\$ 1,071,671.88	\$ 316,132.63	70.50%
					\$ 52,602,157.53	\$ -	\$ 1,109,679.08	\$ -	\$ 1,109,679.08	\$ 54,308,453.10	\$ 69,924,678.72	\$ 15,616,225.62	

Anexo II-A,

La parte conducente a modificar:

ID CONTABILIDAD	CARGO	NOMBRE CANDIDATO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	GASTOS NO REPORTADOS		
					QUEJAS	Jornada Electoral	TOTAL DE GASTOS NO REPORTADOS
47616	ALCALDE	JULIO CESAR	MORENO	RIVERA	\$ 189,999.00	\$ 232.29	\$ 190,231.29
					\$ 265,399.00	\$ 119,062.29	\$ 1,184,778.76

*Para efecto ilustrativo de lo ordenado por la Sala Regional Ciudad de México, en la ejecutoria recaída al expediente SCM-RAP-59/2018, únicamente se transcribe lo correspondiente al C. Julio César Moreno Rivera, en específico lo relativo a los Gastos Reportados, Gastos Determinados por la autoridad, Total de Gastos, Tope de Gastos, Diferencia Tope-Gasto, Porcentaje y el Monto Total por lo que respecta al Anexo II y lo relativo a Gastos no Reportados por cuando hace a Quejas y Jornada Electoral, así como el Total.

Para quedar como sigue:

					GASTOS NO REPORTADOS		
	CARGO	NOMBRE CANDIDATO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	QUEJAS	Jornada Electoral	TOTAL DE GASTOS NO REPORTADOS
47616	ALCALDE	JULIO CESAR	MORENO	RIVERA	\$ 114,899.32	\$ 232.29	\$ 115,131.61
					\$ 190,299.32	\$ 119,062.29	\$ 1,109,679.08

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

ACUERDA

PRIMERO. Se modifica la Resolución **INE/CG849/2018**, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en fecha seis de agosto de dos mil dieciocho, en los términos precisados en el Considerando **6** del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se modifican las cifras del monto determinado al C. Julio César Moreno Rivera, entonces candidato a Alcalde de Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, postulado por la coalición “Por la CDMX al Frente” integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, en relación al tope de gastos de campaña, analizado en el **Considerando 7**, del presente Acuerdo.

TERCERO. Notifíquese personalmente al C. Julio César Moreno Rivera, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SCM-RAP-59/2018**.

CUARTO. Notifíquese contenido del presente Acuerdo a las partes.

QUINTO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral informe a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal Electoral Federal, con sede en la Ciudad de México, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SCM-RAP-59/2018**.

SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo._____

Pasamos ahora al apartado 9.14._____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín._____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:

Muchas gracias Consejero Presidente._____

Este asunto, nos lo revocan por distintas cuestiones, nos ordena la Sala Guadalajara, realizar un conjunto de valoraciones y, sin embargo, no comparto las mismas porque nos ordenan, por ejemplo, revisar algunas lonas respecto del reporte de estas lonas y lo que se señala es que, me parece que el acatamiento tiene una contradicción, por un lado, afirma que no son las mismas lonas las reportadas y las denunciadas._____

Y, por otro lado, afirma que no cuenta la certeza de que la propaganda debidamente reportada sea diferente a la denunciada en la queja. Aunado a que el quejoso no aporte mayores elementos de prueba que puedan sostener lo contrario, por lo que, se dice no existen elementos que permitan concluir que los gastos denunciados no fueron reportados toda vez que no se obtuvieron pruebas suficientes para acreditar el registro contable de las erogaciones._____

Y, entonces, se toma la decisión de partir del principio in dubio pro reo, es decir, en caso de duda se absuelve, sin embargo, si la propia Unidad Técnica de Fiscalización reconoce que las lonas reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) no son las mismas a las denunciadas, me parece que se tiene que tener como un gasto no reportado._____

Por otra parte, nos ordenan hacer un pronunciamiento respecto a las playeras y, sin embargo, el Proyecto de Acuerdo no contiene tal pronunciamiento._____

Luego, sobre la falta que en sí misma constituiría la falta de exhibición de muestras de propaganda utilitaria, la Unidad Técnica, porque en este caso es donde el Tribunal Electoral nos dice que hay una falta al no proporcionar las muestras y concluye que es una conducta que no podría sancionar, porque no hay una garantía de audiencia y, además, se estaría perjudicando al justiciable._____

Me parece que, en este caso, la Sala Regional Guadalajara nos dio la orden de investigar, si dicha omisión no constituía en sí misma una falta en materia de fiscalización, además, que sí se le hizo un requerimiento al denunciado y me parece que esto nuevamente es una discusión sobre cómo entendemos el oficio de errores y omisiones, es decir, si nos pueden subsanar e incrementar las evidencias que se cargan, los gastos que se reportan a partir de estos elementos._____

Me parece que, en este sentido lo que no se está haciendo es un análisis integral que nos permita llegar a un acatamiento completo por lo que, no acompañaría el Proyecto de Acuerdo que se somete a nuestra consideración._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín._____

Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación respectiva.____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 9.14._____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables._____

7 votos._____

¿En contra?_____

2 votos._____

Aprobado por 7 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, no estando presentes durante la votación los Consejeros Electorales, Doctor Benito Nacif Hernández y Maestra Dania Paola Ravel Cuevas), Consejero Presidente._____

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG1295/2018) Ptos. 9.14_____

INE/CG1295/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SG-RAP-228/2018 Y ACUMULADOS

A N T E C E D E N T E S

I. Aprobación de diversos Acuerdos por parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral

- a) En sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución **INE/CG884/2018** respecto del procedimiento de fiscalización identificado como **INE/Q-COF-UTF/630/2018**.
- b) En la misma sesión, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen consolidado INE/CG1125/2018 y la Resolución INE/CG1127/2018 que presentó la Comisión de Fiscalización a dicho consejo respecto de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos y candidatas independientes a los cargos de gobernador, diputados locales y ayuntamientos correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco (partidos políticos y coaliciones).

II. Recursos de apelación.

- a) Inconforme con lo anterior, el dieciocho de agosto de dos mil dieciocho, el representante de Movimiento Ciudadano, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, interpuso recurso de apelación para controvertir el Acuerdo INE/CG884/2018.

El veintidós de agosto de dos mil dieciocho, la Sala Superior ordenó integrar el cuaderno de antecedentes SUP-CA-772/2018, mediante el cual se determinó

reencauzar el expediente a la Sala Regional Guadalajara por ser la competente para conocer y resolver el presente recurso.

El veinticuatro de agosto siguiente, la Sala Regional Guadalajara acordó integrar el expediente respectivo y registrarlo en el Libro de Gobierno con la clave **SG-RAP-228/2018**.

- b) El diez de agosto de dos mil dieciocho, el representante de Movimiento Ciudadano, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, interpuso recurso de apelación para controvertir el Acuerdo INE/CG884/2018, el cual fue remitido a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde fue radicado con el número de expediente SUP-RAP-239/2018.

El quince siguiente, mediante Acuerdo de la Sala Superior determinó reencauzar el expediente a la Sala Regional Guadalajara a efecto de que resolviera lo que en derecho correspondiera.

Por su parte, el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, la Sala Regional Guadalajara acordó integrar el expediente respectivo y registrarlo en el Libro de Gobierno con la clave **SG-RAP-233/2018**.

El tres de septiembre de dos mil dieciocho se declaró el cierre de instrucción del asunto, formulándose el Proyecto de Resolución respectivo, y se propuso la acumulación de dicho expediente al diverso SG-RAP-228/2018.

- c) El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, el C. Enrique Rojas Román, otrora candidato electo a Presidente Municipal de La Barca, Jalisco, postulado por la entonces coalición “Juntos Haremos Historia”, interpuso recurso de apelación para controvertir el Dictamen consolidado y la resolución respecto de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos y candidatas independientes a los cargos de gobernador, diputados locales y ayuntamientos correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco (partidos políticos y coaliciones), identificados con los Acuerdos INE/CG1125/2018 e INE/CG1127/2018, respectivamente, ante la Sala Regional Guadalajara, en donde fue radicado con el número de expediente **SG-RAP-255/2018**.

El tres de septiembre de dos mil dieciocho se declaró el cierre de instrucción del asunto, formulándose el Proyecto de Resolución respectivo, y se propuso la acumulación de dicho expediente al diverso SG-RAP-228/2018.

- d) Finalmente, el diecinueve de agosto de dos mil dieciocho, el C. Benjamín Villanueva Soto, interpuso recurso de apelación para controvertir el Acuerdo INE/CG884/2018, el cual fue remitido a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, se ordenó integrar el cuaderno de antecedentes SUP-CA-774/2018 y remitir la documentación a la Sala Regional Guadalajara a efecto de que resolviera lo que en derecho corresponda.

Por su parte, el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, la Sala Regional Guadalajara acordó integrar el expediente respectivo y registrarlo en el Libro de Gobierno con la clave **SG-RAP-260/2018**.

El tres de septiembre de dos mil dieciocho se declaró el cierre de instrucción del asunto, formulándose el Proyecto de Resolución respectivo, y se propuso la acumulación de dicho expediente al diverso SG-RAP-228/2018.

III. Acuerdo de admisión. El tres de septiembre de dos mil dieciocho, el Magistrado Instructor acordó radicar la demanda y al no advertir causa notoria ni manifiesta de improcedencia, la admitió.

IV. Desahogado el trámite correspondiente, en sesión pública celebrada el tres de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Regional Guadalajara, resolvió los recursos referidos, determinando lo que a la letra se transcribe:

“(…)

RESUELVE

PRIMERO. *Se acumulan los recursos de apelación **SG-RAP-233/2018, SG-RAP-255/2018 y SG-RAP-260/2018 al diverso SG-RAP-228/2018.** Glósele copia certificada de los Puntos Resolutivos de esta ejecutoria al expediente acumulado.*

SEGUNDO. *Se modifica la resolución dictada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en los términos y atento a las razones contenidas en la presente ejecutoria.*

TERCERO. *Se ordena a la autoridad responsable, proceda conforme a lo indicado, y dentro de los plazos señalados, en el apartado 13 de esta sentencia. (...)*

V. Toda vez que en la ejecutoria se ordenó a este Consejo General abordar los temas relativos al reporte y asistencia a dos eventos, prorratio, omisión de reportar agenda y omisión de anexar evidencia fotográfica en diversas pólizas; tomando en cuenta las manifestaciones y prueba contenidas en la queja de Movimiento Ciudadano (que no hubieran sido desestimadas) así como en la contestación realizada por el C. Enrique Rojas Román complementada con su escrito del recurso de apelación SG-RAP-255/2018 y se resolviera sobre el señalamiento del denunciado sobre la aplicación del prorratio correspondiente conforme al gasto con otros candidatos; en su caso, se individualizaran de nueva cuenta las sanciones, así como los montos acumulables para cuantificar el gasto de campaña de Enrique Rojas Román; se verificara si rebasó o no el tope correspondiente.

En el caso de cuantificarse algún monto o acreditarse alguna conducta infractora que incida en los Acuerdos INE/CG1125/2018 e IN/CG1127/2018, o desestimarse la situación del prorratio se emita una nueva resolución en la que se especifique las conclusiones que fueron objeto de modificación, se cuantifique el monto del tope de gastos de campaña del candidato denunciado y si fue rebasado o no.

En virtud de que, de conformidad al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c), d), g) y o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización presentó el Proyecto de Acuerdo correspondiente.

En acatamiento a lo determinado por la Sala Regional con sede en Guadalajara, se realizaron las siguientes diligencias:

VI. Solicitud de información al partido Morena

- a) El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/43329/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la representación de Morena el Consejo General, remitiera las muestras fotográficas de la propaganda investigada, reportada en el Sistema Integral de Fiscalización.

- b) El seis de septiembre de dos mil dieciocho, dicha representación dio respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior.

VII. Solicitud de información al Partido del Trabajo

- a) El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/43329/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la representación del Partido del Trabajo el Consejo General, remitiera las muestras fotográficas de la propaganda investigada, reportada en el Sistema Integral de Fiscalización.
- b) En esa misma fecha, el Partido del Trabajo dio respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior.

VIII. Solicitud de información a Encuentro Social

- a) El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/43329/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la representación de Encuentro Social el Consejo General, remitiera las muestras fotográficas de la propaganda investigada, reportada en el Sistema Integral de Fiscalización.
- b) En esa misma fecha, el Partido del Trabajo dio respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior.

IX. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y otros.

- a) El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/1258/2018, se solicitó información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, respecto de los eventos y propaganda electoral denunciada.
- b) El seis de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros dio respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior.

X. Solicitud de información a Mardaah Commercial Group, S.A. de C.V.

- a) El seis de septiembre de dos mil dieciocho, a través de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Jalisco, se requirió al Representante o Apoderado Legal de la Persona Moral en cita, remitiera las muestras fotográficas de la propaganda objeto de investigación.
- b) A la fecha, la persona moral referida no ha dado respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior.

XI. Solicitud de información a Impresiones H, S.A. de C.V.

- a) El seis de septiembre de dos mil dieciocho, a través de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Jalisco, se requirió al Representante o Apoderado Legal de la Persona Moral en cita, remitiera las muestras fotográficas de la propaganda objeto de investigación.
- b) A la fecha, la persona moral referida no ha dado respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior.

XII. Razones y constancias

- a) El Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, el cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, levantó razón y constancia respecto del cotejo en el Sistema Integral de Fiscalización, específicamente en la contabilidad de los candidatos a los cargos de Presidente de la República, Diputado Federal por el Distrito 15, Gobernador del estado de Jalisco, Diputada Local por el Distrito 15 y Presidente Municipal de La Barca, en dicha entidad, los CC. Andrés Manuel López Obrador, Francisco Segoviano Trujillo, Carlos Lomelí Bolaños, Imelda Serratos Madrigal y Enrique Rojas Román, respectivamente, referente al reporte de los gastos denunciados.
- b) En la misma fecha, se hizo constar por el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización para todos los efectos legales la búsqueda y descarga realizada en el Sistema Integral de Fiscalización, específicamente en el módulo “Agenda de Eventos”, de los reportes relativos a los actos de campaña realizados por los entonces candidatos denunciados correspondientes a los Procesos Electorales Federal y Local Ordinario 2017-2018.

- c) En la misma fecha se hizo constar por el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización para todos los efectos legales la consulta realizada al portal de rendición de cuentas y resultados de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, presentado como elemento de prueba por el quejoso.

CONSIDERANDOS

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a) y n) de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos a) y j); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer y pronunciarse sobre los gastos por la realización de eventos de campaña denunciados.

2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso el recurso de apelación identificado como **SG-RAP-228/2018 y sus acumulados**.

3. Que el tres de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Regional con sede en Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió **modificar** la Resolución identificada con el número **INE/CG884/2018**, dictada por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, misma que fue impugnada por Movimiento Ciudadano, Enrique Rojas Román y Benjamín Villanueva Soto, para los efectos precisados en la ejecutoria. A fin de dar cumplimiento a los mismos, se procederá a atender a cabalidad las bases establecidas en la sentencia precisada.

4. Que por lo anterior y en razón de los Considerandos **8.3, 11.2, 12.2.1 y 13** de la sentencia **SG-RAP-228/2018 Y Acumulados**, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal con sede en Guadalajara, Jalisco, determinó **fundados** los agravios hechos valer por los recurrentes como a continuación se transcribe:

“(…)

8. OMISIÓN DE VALORAR DOS EVENTOS DE CAMPAÑA Y REALIZAR PRORRATEO

8.1. Síntesis de agravios de MC y Benjamín Villanueva Soto.

La responsable no indagó debidamente los hechos reconocidos por el denunciado, a pesar de su obligación de desplegar sus facultades de fiscalización de oficio y cuando tenga noticia del caso.

Sobre esto, el candidato denunciado reconoció la celebración de dos eventos de campaña (veintiuno de mayo y veintiséis de junio de este año), los cuales no fueron debidamente agendados, y fueron certificados sobre su realización por notario público como prueba para este medio de impugnación (el primer evento).

El personal del INE, indica, monitoreó el segundo evento, por lo que deberá de remitir dicha constancia, Luego, a pesar de contar con toda la información necesaria, la responsable pasó por alto tal circunstancia, por lo cual debe reponerse el procedimiento ya que podía recabar pruebas para comprobar que hubieron gastos no reportados y agendas incumplidas, máxime que no hubo deslindes de propaganda según lo establece el artículo 212 del Reglamento de Fiscalización, y dada la confesión del denunciado, debió estar en posibilidad de aplicar el prorrateo para determinar el porcentaje de gastos no reportados.

Agrega que el candidato denunciado al presidente municipal de La Barca, Jalisco, por la Coalición 'Juntos Haremos Historia', reconoció en su escrito de contestación de la queja, la participación en dos eventos proselitistas, solicitando la aplicación de un prorrateo con los candidatos a la Presidencia de la República y a la diputación federal que refiere.

Dichos hechos no fueron controvertidos y, concluye el recurrente, están reconocidos; empero, la responsable vulneró los principios de exhaustividad y congruencia pues no fueron objeto de pronunciamiento.

8.2. Síntesis de agravios de Enrique Rojas Román.

Señala Enrique Rojas Román, candidato electo del Ayuntamiento de La Barca, que por un error se omitió declarar los eventos de campaña de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, pero el mismo fue debidamente registrado y comprobado por Francisco Segoviano Trujillo y con la debida oportunidad se registró el evento en la agenda, según se aprecia en la página de Internet y monitoreado lo realizado en la fecha antes señalada por personal del INE Ulises Santiago Venegas Pérez según acta INE-VVE-0018405.

También se omitió el caso de una casa de campaña. Sin embargo, señala el ciudadano, se determina el valor de gastos no reportado como los señalados con antelación (evento y casa), sin tener elementos suficientes, pues Francisco Segoviano Trujillo ya lo había reportado en sus gastos de campaña y se le determinó en el mismo sin realizar el prorrateo.

Es decir, prosigue en sus motivos de agravios, se consideró un rebase en el tope de gastos correspondiente al evento de veintiséis de junio de este año, cuyo valor fue determinado al 100% al suscrito, sin realizar el correspondiente prorrateo establecido en el artículo 83 de la Ley General de Partidos Políticos, omitiendo considerar que no fue el único que se benefició del referido evento sino también otros candidatos (los cuales precisa en su escrito recursal), dejando de tomar en cuenta el acta de verificación, por lo que al no haberse prorrateado conforme al Reglamento de Fiscalización se consideró dicho rebase.

8.3. Solución jurídica.

*Son **fundados** los agravios.*

En cuanto a MC y Benjamín Villanueva Soto, la razón que les asiste es por lo siguiente.

Tal como se contiene en el acto impugnado, la responsable desestimó la valoración probatoria respecto a los eventos realizados el veintiuno de mayo y el veintiséis de junio en La Barca, Jalisco, con la participación del candidato denunciado, debido a la insuficiencia de las pruebas técnicas aportadas por el partido recurrente.

Además, dejó de tomar en cuenta las manifestaciones espontaneas del denunciado en su contestación de la queja, en el que reconoce la invitación en la primera fecha señalada y la participación en la segunda.

En tal orden de ideas, la responsable debió concatenarlo con las pruebas ofrecidas por el recurrente en la queja, incluso con las de propio candidato objeto de la denuncia, para así llegar a determinar la posible infracción de alguna conducta, o bien, el cumplimiento a la misma.

En tal orden de ideas, debe revocarse este apartado de la resolución impugnada de acuerdo a los efectos que se precisarán en el punto respectivo.

No sobra precisar que sobre ello, la responsable no deberá tomar en cuenta las actas notariales levantadas sobre dichos eventos.

(...)

11. INSUFICIENCIA EN LA VALORACIÓN DE PRUEBAS Y OMISIÓN DE RECABARLAS SOBRE LA AUSENCIA DE REPORTE DE AGENDA E INCURRIR EN INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA FUERA DE TIEMPO

11.1. Síntesis de agravios.

Señalan los recurrentes que la responsable vulnera los principios de congruencia, exhaustividad y objetividad, pues atendiendo al escrito de la queja presentado el diez de julio de este año, se insertó un cuadro que indicaba la fecha de actividad, lugar y actividades, así como elementos susceptibles de verificación.

Refieren que algunos fueron certificados por notario y otros obran publicados por la candidatura denunciada en su página de Facebook, y los mismos fueron omitidos en las agendas reportadas al INE, dificultando su fiscalización (Se anexa la misma a la demanda para demostrar que no fueron meros dichos).

Reclaman que, aunque se aportaron elementos subjetivos y verificables, sobre actividades denunciadas no agendadas por el candidato, la UTF requería mayores elementos (modo, tiempo y lugar), pero la responsable debió aplicar sus facultades investigadoras previstas en el RF, por lo que lo realizado por la responsable fue insuficiente e incluso parcial.

Ante la omisión de reportar actividades en la agenda la responsable debió iniciar un procedimiento sancionador de oficio y no lo hizo. Manifiestan que parecería una defensa del denunciado pues en su resolución afirma que MC debió suplir a la UTF en sus facultades, y al no hacerlo, las consecuencias para el denunciado no fueron tan graves.

En lugar de confrontar los datos aportados en la queja con los que obran en su poder, se dedicó a descalificarlos, arguyendo que no tenían ni siquiera valor indiciario pese a que el denunciado no había agendado actividades de campaña y presenta una actividad de gastos inverosímil.

Reiteran que en la tabla anexa en la demanda se tomaron datos de la página web del denunciado, y se acreditan los hechos motivo de queja.

Manifiestan que se aplicó un procedimiento de estricto derecho para el denunciante, pero no para el denunciado, ya que, al no acreditarse la agenda de eventos de las actividades demostradas en la red social del candidato de La Barca, surge la duda de porqué la responsable no inició un procedimiento de

oficio, aunado la cantidad insostenible de gastos en comparación con las actividades de Facebook.

Señalan que el principio de presunción de inocencia no opera en materia de fiscalización como en otros procedimientos, pues las cargas son distintas, y el denunciado tiene la obligación de reportar los gastos y comprobarlos de manera oportuna.

Conforme a los artículos 29, 34, 36 y demás aplicables del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el denunciante sólo tiene que aportar su denuncia narrando hechos y soportándolo con pruebas verosímiles, sin la exigencia de que sean plenas, sino en todo caso indiciarias.

De los informes de gastos de campaña de la parte denunciada, no se advierte reporte alguno de la agenda de actividades, según la dirección electrónica señalada en el escrito, situación que la UTF pretende pasar por inadvertido, cuando debió iniciar un procedimiento de oficio.

11.2. Solución jurídica.

(...)

Por último, respecto a la omisión de valorar la falta de registro de agenda de eventos derivados de los informes de gastos de campaña es fundado.

Según se desprende del escrito de queja, MC señaló que debieron reportarse diversos actos de campaña por el candidato denunciado, tomando en cuenta las redes sociales, pero además ofreció el contenido del Formato 'IC-COA', anexando entre otras constancias, una impresión (a foja 43 del cuaderno accesorio único) de lista de reportes. Dicha situación no fue abordada por la responsable, pese a tratarse de un indicio derivado del propio sistema de fiscalización, lo que hubiera motivado, como mínimo, una conciliación con los datos contables registrados en el propio sistema.

En ese sentido, como lo refieren los recurrentes, existe una omisión en reportar eventos en la agenda de campaña, a la luz de las pruebas ofrecidas, por lo que la responsable estaba constreñida a verificar dicha situación, y sólo en el caso de estimarlo necesario, concatenarlo con los 'links' proporcionados.

Es decir, el sólo ofrecimiento de la prueba referida como 'lista de reportes' era punto inicial de realizar una facultad de investigación sobre el mismo para corroborarlo o demeritarlo.

De ahí que proceda la revocación sobre este aspecto.

(...)

12.2. Síntesis de agravios respecto al Apartado A, número (1) en la tabla.

Señalan que hay incongruencia en la resolución, pues de las fotografías no era posible advertir el contenido de la propaganda y por ello no puede pronunciarse, pero después refiere que en el material probatorio se identifican concepto de propaganda relativos a lonas, pinta de bardas, playeras y chalecos.

Luego indica que no se proporcionan elementos de prueba y después señala que de los elementos técnicos es posible advertir un número mínimo de conceptos de propaganda, incluso que después concilió los conceptos con lo reportado en el SIF para concluir que fueron reportadas por el denunciado.

Sólo se consideró la existencia de cierta propaganda, pero se pronunció sobre una parte de dichos conceptos.

Además, reconoce la existencia de elementos sobre la propaganda colocada y la describe, para después señalar que no se desprenden aspectos cuantitativos ni cualitativos (a su decir, la existencia de la tabla A y la certificación de la red social Facebook evidencian la existencia de los elementos indicados).

En cuanto a las bardas, una vez realizada la conciliación, debió requerirse al candidato denunciado y contabilizar los gastos de barda no reportados, sin que fuera necesario precisar mayores datos al tener los logos de la Coalición las referidas pintas de bardas.

Sobre las bardas, chalecos, playeras y lonas, debió percatarse que los gastos reportados en facturas carecen de "ID" del candidato, del proveedor del INE y son meras notas de mostrador, pues la responsable sólo menciona un recuadro.

Atinente a la omisión de la muestra fotográfica, se permitió un reporte sin anexarlas, tolerando la infracción administrativa pues la ilegalidad no puede ser motivo de justificación para la irresponsabilidad, máxime que en el reglamento se exige la exhibición de estas.

12.2.1. Solución jurídica.

*Es **infundada** la afirmación de una contradicción de la responsable, pues de la lectura integral de dichos párrafos del acto impugnado se aprecia la afirmación sobre la imposibilidad para determinar claramente el contenido de la propaganda, así como los elementos cualitativos y cuantitativos para determinar un beneficio económico.*

A partir de ello analiza lo que se puede advertir, como un número determinado de playeras, lonas y chalecos, pero sin poder corroborar el número indicado en la queja, pese a las fotografías y videos contenidos en la descripción de la tabla.

Al requerir una mayor descripción precisa este tipo de pruebas técnicas, en virtud de su carácter imperfecto, fue difícil concretizar los elementos derivados de ellas.

Así, la responsable describió dichos medios de convicción, sin que pudiera advertirse la contradicción alegada.

Tampoco existe incongruencia al realizarse una consulta al SIF, pues la razón dada por la responsable es para apegarse al principio de exhaustividad en el concepto de propaganda, el cual era objeto de análisis.

Por ello, contrario a lo afirmado por el recurrente, la conciliación se realizó sobre la base de que había propaganda, lo que no pudo corroborarse como existente es el número de ellas o la cualidad.

En tal orden de ideas, las pólizas obtenidas derivan del ejercicio que la responsable denominó “exhaustividad” en lugar de la obtención de dichos datos de la tabla A, por lo cual el alegato sobre tomar en cuenta otros elementos de la misma parte de situación diversa al origen de la conciliación de datos en el sistema de fiscalización.

Tampoco resulta suficiente la concatenación realizada por los apelantes sobre la posibilidad de desprender los elementos cuantitativos y cualitativos de la propaganda, pues los hace descansar del análisis de las pruebas técnicas y los datos contenidos en la tabla “A”, situación desestimada antes por la responsable dada la imperfección de las pruebas técnicas.

Por ello, como se ha señalado a lo largo de este asunto, la descripción de la tabla y de las pruebas técnicas (cuyo contenido de ‘link’ fue certificado por la Oficialía Electoral) debe concatenarse con otros medios de convicción para darle certeza de su realización (circunstancias de modo, tiempo y lugar).

Referente a las bardas, tal situación se califica de inoperante ya que dicho concepto no fue analizado en el apartado que es motivo de controversia, ni identifica a cuál informe se refiere o cuáles fotografías son las aportadas.

Por cuanto debió percatarse la responsable de la ausencia de elementos de validez en las pólizas o facturas exhibidas, el mismo es inoperante pues debieron precisar a cuál póliza hacen referencia o cómo se incumple los requisitos legales, pues el hecho de encontrarse registrado en el sistema

fiscalizador genera la presunción de cumplirse con los Lineamientos previstos para tal efecto, entre ellos, la factura del servicio a cargo de un proveedor registrado o autorizado ante el INE, por lo que sus afirmaciones resultan vagas y genéricas.

*Sobre la ausencia de muestras fotográficas, lo cual se aleja de la debida fundamentación y motivación, es **fundado**.*

Tal como refieren, en el RF, concretamente en sus artículos 77, numeral 3, inciso f), 216, numeral 2, 246, numeral 1, inciso c), parte final (in fine), 247, numeral 1, inciso f), y 377, numeral 1, inciso d), prevé que para el caso de que se controle propaganda utilitaria o electoral que contenga el nombre, lema o datos que permitan la asignación de bienes o productos a una precampaña o campaña beneficiada, se deberá registrar en el kardex respectivo el nombre completo de la campaña y el candidato y los actos de precampaña o campaña a los que se haya destinado la propaganda, y se deberá adjuntar una fotografía de la muestra, misma que será parte integrante del kardex respectivo; y se deberán conservar y presentar fotografías de la publicidad utilizada en bardas, indicando su ubicación exacta.

En ese sentido, fue indebido el razonamiento de la responsable al señalar que al no adjuntarse no se tenía certeza si correspondía a las referidas en la denunciada, pues se advertía el incumplimiento a una obligación legal de fiscalización.

Ello, porque no quedaba al arbitrio de la responsable allegarse de documentación conforme al artículo 15, párrafo 3, del RPSMF, sino que debía requerir al denunciado o a quien considere idóneo, pues el artículo aplicable era el 205 del RF (muestras de propaganda utilitaria), al disponer que los partidos, coaliciones, precandidatos, aspirantes, candidatos y candidatos independientes, deberán conservar y presentar muestras de la propaganda cuando la UTF lo solicite y deberán incorporar en el Sistema de Contabilidad en Línea, una imagen de las muestras referidas.

Sin que sea óbice el razonamiento de la responsable sobre la carga mínima probatoria, pues fue ella quien introdujo los elementos objeto de controversia, y en un congruente apego al principio de exhaustividad, debió conciliar los datos y complementarlos o completarlos a fin de resultar idóneos para el procedimiento sancionador.

De esta manera, debió requerirse por dichas fotografías, con independencia de la posible sanción o no derivado del incumplimiento al RF.

Por tanto, debe revocarse ese aspecto del acto impugnado.

(...)

13. EFECTOS

Al resultar fundados los agravios en los puntos 8.3, 11.2 y 12.2.1, lo procedente es modificar el acto impugnado, revocando los apartados ahí contenidos y confirmando el resto de lo controvertido.

En ese sentido, se ordena al Consejo General del INE:

A) En un plazo de ocho días, contadas a partir de que sea notificado de la presente sentencia, proceda a emitir una nueva resolución en la cual:

- Aborde los temas contenidos en los puntos antes descritos (reporte y asistencia a dos eventos, prorrateo, omisión de reportar agenda, y omisión de anexar evidencia fotográfica), recabando la información que así considere necesaria y conciliándolo con el Sistema de Contabilidad en Línea también conocido como SIF.*
- En todo momento deberá tomar en cuenta las manifestaciones y pruebas contenidas en la queja de MC (que no hubieren sido desestimadas) así como en la contestación de esta realizada por Enrique Rojas Román, complementada con su escrito del recurso de apelación SG-RAP-255/2018 (respecto a los temas en él incluidos).*
- Sobre ello, también resolverá el señalamiento del denunciado sobre la aplicación del prorrateo correspondiente conforme al gasto con otros candidatos.*
- En su caso, individualice de nueva cuenta las sanciones, así como los montos acumulables para cuantificar el gasto de campaña de Enrique Rojas Román y verificar si rebasó o no el tope correspondiente, así como las demás consecuencias legales que así procedan conforme a derecho.*

B) En el caso de cuantificarse algún monto o acreditarse alguna conducta infractora que incida en los acuerdos INE/CG1125/2018 e INE/CG1127/2018 (Informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de gobernador, diputados locales y ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017- 2018, en el Estado de Jalisco [partidos políticos y coaliciones]), o desestimarse la situación de prorrateo, dentro del mismo lapso indicado en el inciso A), así como en la sesión de resolución del procedimiento sancionador en materia de fiscalización⁷⁵, emitirá una nueva resolución en la cual:

- *Se especifique las conclusiones (del Dictamen y/o resolución) que fueron objeto de modificación o revocación con motivo de los efectos de la nueva resolución del procedimiento de queja INE/Q-COFUTF/630/2018.*
- *Se cuantifique el monto de tope de gastos de campaña del candidato denunciado y si fue rebasado o no.*
- *Se individualice la sanción a los partidos involucrados y a los sujetos infractores, en su caso.*
- *Las demás modificaciones que procedan conforme a los efectos del procedimiento sancionador en materia de fiscalización.*
- *En caso de desestimarse el prorrateo, especifique los conceptos sancionados o infracciones relacionadas de dicha situación, y las razones por las cuales no procedió el reclamo.*

(...)”

Por lo anterior, esta autoridad debe emitir una nueva determinación considerando los razonamientos hechos por la Sala Regional Guadalajara.

5. Que al quedar intocadas las demás consideraciones que sustentan la Resolución identificada con el número INE/CG884/2018, este Consejo General únicamente se abocará al pronunciamiento de fondo relativo al reporte de los gastos relativos a dos eventos a los que asistió el candidato denunciado, al reporte de los mismos en la agenda de eventos, los conceptos respecto a los cuales el sujeto obligado no presentó muestras fotográficas en el Sistema Integral de Fiscalización, a efecto de determinar si se configura una infracción en materia de fiscalización por parte de los sujetos incoados y, en su caso, el prorrateo de los gastos referidos en el procedimiento de queja en materia de fiscalización identificado como INE/Q-COF-UTF/630/2018.

En ese sentido, de conformidad con el considerando **13. EFECTOS** de la ejecutoria de mérito, esta autoridad emitirá una nueva determinación, con la finalidad de realizar el estudio y análisis de lo siguiente:

- El reporte de los gastos relativos a dos eventos de campaña tomando en cuenta las manifestaciones y pruebas contenidas en la queja, así como en la contestación de esta realizada por Enrique Rojas Román.
- La valoración de las consideraciones relativas al prorrateo de los gastos antes referidos entre los candidatos asistentes.

- La omisión de reportar eventos en la agenda de actos públicos del candidato Enrique Rojas Román.
- La omisión de anexar evidencia fotográfica, recabando la información que se considere necesaria y conciliándolo con el Sistema de Contabilidad en Línea.
- En su caso, se procederá a individualizar la sanción de nueva cuenta, así como a determinar los montos acumulables para cuantificar el gasto de campaña de Enrique Rojas Román para verificar si rebasó o no el tope correspondiente y las demás consecuencias legales que así procedan conforme a derecho.

En ese sentido, las demás consideraciones de la Resolución identificada como INE/CG884/2018, que no hayan sido sujetas a modificación no serán sujetas materia de análisis en el presente cumplimiento.

Por lo anterior, se procede a dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito modificando para tal efecto los **Considerandos 2 y 3** de la Resolución primigenia para quedar en los términos siguientes:

2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que establece que las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, procede entrar al estudio del presente caso para determinar si se actualiza o sobreviene alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse, ya que, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada.

Visto lo anterior, es necesario determinar si se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; dicho precepto señala que:

**“Artículo 32.
Sobreseimiento**

1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando:

*I. El procedimiento respectivo haya **quedado sin materia**”*

En atención a lo expuesto, es procedente analizar si esta autoridad electoral debe sobreseer el procedimiento que por esta vía se resuelve, identificado con el número

de expediente INE/Q-COF-UTF/630/2018, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32, numeral 1, fracción I del referido Reglamento.

Debe decirse que la acción de determinar si los hechos denunciados constituyen o no una conducta violatoria de la normatividad en materia de financiamiento y gasto, no implica que esta Unidad Técnica de Fiscalización entre a su estudio para resolver si existe o no una violación (cuestión de fondo que implicaría que los hechos denunciados tuviesen que declararse fundados o infundados), sino sólo implica determinar si de los mismos se desprenden actos u omisiones que se encuentren contemplados como infracciones en materia de fiscalización en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (cuestión formal).

En virtud de lo anterior, del análisis a las constancias que integran el expediente se desprende que el quejoso denuncia gastos por concepto de arrendamiento de una casa de campaña, perifoneo y adquisición de playeras, los cuales se identifican para pronta referencia con (6) en la columna “Referencia” de la Tabla “A” del estudio de fondo de la presente Resolución.

Derivado de lo anterior, la autoridad instructora acordó admitir el escrito de queja presentado, para iniciar la sustanciación e investigación de los hechos denunciados, en virtud de ello, durante la sustanciación del presente procedimiento, sobre el particular, es importante señalar que esta autoridad dirigió la línea de investigación al Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco, así como a la Resolución atinente, a efecto de verificar si hubo algún pronunciamiento de la autoridad con respecto a los conceptos en estudio.

En ese sentido, de la lectura al citado Dictamen, específicamente por lo que se refiere a las conclusiones **11-C57-P2** y **11-C63-P2**, se desprende que, en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos antes referidos, la Unidad Técnica de Fiscalización observó la omisión por parte del hoy incoado de reportar los gastos por concepto de arrendamiento de una casa de campaña, perifoneo y adquisición de playeras.

Consideraciones relativas al acatamiento de la sentencia SG-RAP-228/2018 y acumulados

Aunado a lo anterior, y en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara, respecto a “*determinar la posible infracción de alguna conducta, o bien, el cumplimiento a la misma*”, se analiza a continuación lo relativo al evento de cierre de campaña que se llevó a cabo el día 26 de junio de 2018, identificado con (**Acatamiento 1**) en la columna Referencia de la Tabla “A” del Considerando 3.

“Además, en ese mismo lugar, pero con fecha 26 de junio de 2018, participé en el evento de cierre de campaña junto con el candidato por la coalición "Juntos Haremos Historia" a Diputado Federal por el XV Distrito Electoral en el Estado de Jalisco, el señor Francisco Segoviano Trujillo, y este evento también fue monitoreado por personal del INE. Ahora bien, cabe señalar, que respecto de éstos eventos no realicé gasto alguno, sin embargo, entiendo que se deba aplicar el prorrateo correspondiente, conforme al gasto informado y acreditado por los mencionados candidatos”

“Este evento fue debidamente monitoreado por funcionarios del Instituto Nacional Electoral, tal y como puede apreciarse en el Acta de Verificación número INE-VV-0018405, levantada por el Auditor Monitorista Ulises Santiago Venegas Pérez, con motivo de la Orden de Visita número PCF/CMR/1767/2018.”

En ese sentido, de la lectura al citado Dictamen, específicamente por lo que se refiere a la conclusión **11-C63-P2**, se desprende que, en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos antes referidos, la Unidad Técnica de Fiscalización observó la omisión por parte del hoy incoado de reportar los gastos por la realización del evento en mención, mismo que fue verificado por la autoridad como consta en el acta número INE-VV-0018405, como se puede observar en la página 162 del Dictamen referido, misma que a continuación se muestra:

2904

En ese tenor, se concluye que el evento denunciado por el quejoso de fecha 26 de junio de 2018, ya fue materia de pronunciamiento por parte de la autoridad; razón por la cual, no debe ser objeto del estudio de fondo de la presente Resolución.

Al respecto, se destaca que el procedimiento de revisión de Informes de Campaña constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado, así como aquellos obtenidos o elaborados por la propia autoridad fiscalizadora.

Bajo esa tesitura, y en virtud de que el quejoso solicitó que fuera investigado mediante un procedimiento administrativo sancionador, el probable incumplimiento de la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, y de sus entonces candidato a la Presidencia de la Municipal de La Barca, Jalisco, el C. Enrique Rojas Román, respecto de la omisión de reportar diversos gastos (casa de campaña, perifoneo y adquisición de playeras, entre otros), toda vez que esa conducta ha sido observada y sancionada en el marco de la revisión a los informes de ingresos y egresos de campaña de los sujetos obligados en el Proceso Electoral que transcurre, en la especie se actualiza un inminente pronunciamiento por parte de la autoridad fiscalizadora, sobre los hechos denunciados, por lo que procede sobreseer el procedimiento sancionador en que se actúa.

Lo anterior, en virtud de que esta autoridad al tener por recibido el escrito de queja, determinó realizar diligencias a efecto de allegarse de elementos que le posibilitaran un pronunciamiento; sin embargo, al advertir de su análisis previo que los hechos denunciados serán materia de un pronunciamiento por esta misma autoridad fiscalizadora en el Dictamen Consolidado y la correspondiente Resolución derivado de la revisión a los informes de campaña de los sujetos obligados, respecto a que si las conductas denunciadas constituyen o no un ilícito en materia de fiscalización, se actualiza la causal prevista en la fracción I, del numeral 1, del artículo 32, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

Robustece lo anterior, el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 34/2002¹, cuyo texto íntegro se reproduce a continuación:

“IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA.- El artículo 11, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios Impugnación en Materia Electoral, contiene implícita una causa de **improcedencia** de los medios

¹ Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 37 y 38.

de impugnación electorales, que se actualiza cuando uno de ellos queda totalmente sin materia. El artículo establece que procede el sobreseimiento cuando la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución o sentencia. Conforme a la interpretación literal del precepto, la causa de **improcedencia** se compone, a primera vista, de dos elementos: a) que la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque, y b) que tal decisión deje totalmente sin materia el juicio o recurso, antes de que se dicte resolución o sentencia. Sin embargo, sólo el segundo elemento es determinante y definitorio, ya que el primero es instrumental y el otro sustancial; es decir, lo que produce en realidad la **improcedencia** radica en que quede totalmente sin materia el proceso, en tanto que la revocación o modificación es el instrumento para llegar a tal situación. Ciertamente, el proceso jurisdiccional contencioso tiene por objeto resolver una controversia mediante una sentencia que emita un órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, que resulta vinculatoria para las partes. El presupuesto indispensable para todo proceso jurisdiccional contencioso está constituido por la existencia y subsistencia de un litigio entre partes, que en la definición de Carnelutti es el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro, toda vez que esta oposición de intereses es lo que constituye la materia del proceso. **Al ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio**, por el surgimiento de una solución autocompositiva o **porque deja de existir la pretensión o la resistencia, la controversia queda sin materia, y por tanto ya no tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción y preparación de la sentencia y el dictado mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos, mediante una resolución de desechamiento, cuando esa situación se presenta antes de la admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre después. Como se ve, la razón de ser de la causa de improcedencia en comento se localiza precisamente en que al faltar la materia del proceso se vuelve ociosa y completamente innecesaria su continuación.** Ahora bien, aunque en los juicios y recursos que en materia electoral se siguen contra actos de las autoridades correspondientes, **la forma normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste en la mencionada por el legislador, que es la revocación o modificación del acto impugnado, esto no implica que sea éste el único modo, de manera que cuando se produzca el mismo efecto de dejar totalmente sin materia el proceso, como producto de un medio distinto, también se actualiza la causa de improcedencia en comento.**

Tercera Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. [SUP-JDC-001/2000](#) y acumulados. Pedro Quiroz Maldonado. 2 de marzo de 2000. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. [SUP-JRC-046/2000](#). Democracia Social, Partido Político Nacional. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de votos

Juicio de revisión constitucional electoral. [SUP-JRC-047/2000](#). Partido Alianza Social. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de votos.

La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria."

En razón de lo anterior, y con el fin de evitar una posible contradicción entre las resoluciones o criterios emitidos respecto a un mismo asunto y no vulnerar el principio de economía procesal o causar actos de molestia innecesarios a particulares, lo procedente es sobreseer el presente procedimiento al actualizarse la causal de **sobreseimiento** contenida en la fracción I, numeral 1 del artículo 32 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización transcrito con anterioridad.

Por las consideraciones fácticas y normativas anteriores, esta autoridad considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización señalada en el artículo 32, numeral 1, fracción I, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, debido a que toda vez que los gastos por concepto de arrendamiento de una casa de campaña, perifoneo, adquisición de playeras y conceptos que fueron detectados en el evento de 26 de junio de 2018, y, por lo tanto, observados y sancionados, en el marco de la revisión del Dictamen y Resolución correspondientes, el presente procedimiento ha quedado sin materia, por lo tanto, lo procedente es decretar el **sobreseimiento**.



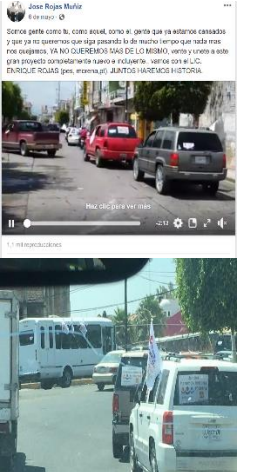
3. Estudio de fondo.





(...)²




Establecido lo anterior, se procede al análisis de los hechos narrados en el escrito de queja, detallando en un primer momento los conceptos de gasto objeto de denuncia, las pruebas ofrecidas por la quejosa y la valoración que esta autoridad realizó en cada caso, en los términos que a continuación se precisan:



² De conformidad con lo ordenado en la sentencia SG-RAP-228/2018 y acumulados, todo lo anterior no fue materia de modificación, por lo que queda en los términos originalmente establecidos en el acuerdo INE/CG884/2018.




Consecutivo	TABLA "A"				
	FECHA	DESCRIPCION	FOTOGRAFIA	GASTO PRESUMIBLE	REFERENCIA
1	28 Abril 2018	Acto anticipado de campaña del Candidato por la Coalición "Juntos Haremos Historia" de La Barca, Jal. Enrique Rojas Román. Publicación en página de Facebook a nombre de José Rojas Muñiz. Se puede consultar en página de Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100008401632794		No lo señala el quejoso	Vista al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco
2	29 Abril 2018	El Candidato por la Coalición "Juntos Haremos Historia" de La Barca, Jal. Enrique Rojas Román. Utilizo durante los 60 días de campaña su vehículo particular para sus traslados, SUV Lincoln MKX 2010 color tinto, tal y como se aprecia en el perfil de Facebook a nombre de José Rojas Muñiz. https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1888341371455899&set=pcb.1888341911455845&type=3&theater		Vehículo SUV Lincoln MKX 2010 color tinto uso 60 días	(5)
3	29 Abril 2018 al 27 de Junio 2018	Gasto de combustible del vehículo SUV Lincoln MKX 2010 color tinto, del Candidato por la Coalición "Juntos Haremos Historia" de La Barca, Jal. Enrique Rojas Román.	Sin muestra	Combustible de 60 días de campaña	(5)
4	29 Abril 2018	Renta de casa de campaña del Candidato por la Coalición "Juntos Haremos Historia" de La Barca, Jal. Enrique Rojas Román. Ubicada en Raymundo Vázquez Herrera 659 Col. Centro en La Barca, Jalisco.		Renta de casa de 2 meses que duró la campaña	(6) En términos del Considerando 2 de la presente Resolución se sobresee el procedimiento en cuanto a este concepto.
5	29 Abril 2018	Lona en la casa de Campaña del Candidato por la Coalición "Juntos Haremos Historia" de La Barca, Jal. Enrique Rojas Román. Ubicada en Raymundo Vázquez Herrera 659 Col. Centro en La Barca, Jalisco.		Lona de Vinil de 2.5 x 1.8 mts	(1)





Consecutivo	TABLA "A"				
	FECHA	DESCRIPCION	FOTOGRAFIA	GASTO PRESUMIBLE	REFERENCIA
6	1 Mayo 2018	Mitin en unidad deportiva de la Barca del Candidato por la Coalición "Juntos Haremos Historia" de La Barca, Jal. Enrique Rojas Román. donde utilizaron banderas y otorgaron agua de sabor para 200 personas se puede consultar en el perfil de Facebook a nombre de José Rojas Muñiz. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1886903208266382&set=pcb.1886903508266352&type=3&theater		Banderas 2 jarras de agua de sabor Bocina Micrófono	(4)
7	3 Mayo 2018	Mitin en plaza de la comunidad del guamúchil en el quiosco, del Candidato por la Coalición "Juntos Haremos Historia" de La Barca, Jal. Enrique Rojas Román. Donde utilizaron bocinas y micrófono. Perfil de Facebook de José Rojas Muñiz. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1787591841286958&set=pcb.1787593837953425&type=3&theater		Bocinas Micrófono Banderas	(4)
8	6 Mayo 2018	Caravana de 30 vehículos y camión de pasajeros, con propaganda (banderas, calcomanías de micro perforado) la cual fue por toda la barca, con duración aproximada de 2 horas del Candidato por la Coalición "Juntos Haremos Historia" de La Barca, Jal. Enrique Rojas Román y que se aprecia en el Perfil de Facebook de José Rojas Muñiz. https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889104524712917/?id=100008401632794&rdc=1&rdr		30 vehículos Gasolina de 30 vehículos Banderas blancas PES Calcomanías micro perforado Renta de Camión de pasajeros Camioneta con bocinas con perfoneo	(4) (2) (6) En términos del Considerando 2 de la presente Resolución se sobresee el procedimiento en cuanto a este concepto.





Consecutivo	TABLA "A"				
	FECHA	DESCRIPCION	FOTOGRAFIA	GASTO PRESUMIBLE	REFERENCIA
9	6 Mayo 2018	Carava de 30 vehículos con propaganda (banderas, calcomanías) en la comunidad de San José de las Moras del Candidato por la Coalición "Juntos Haremos Historia" de La Barca, Jal. Enrique Rojas Román y que se corrobora en el Perfil de Facebook de José Rojas Muñiz. https://web.facebook.com/10008401632794/videos/1889104524712917/UzpfSTEwMDAwODQwMTYzMjc5NDoxOQg5MTA3MTE4MDQ1OTkx/?		30 vehículos Gasolina de 30 vehículos Banderas Blancas PES	(3)
10	7 Mayo 2018	Carava de 22 vehículos en la comunidad de Zalamea, del Candidato por la Coalición "Juntos Haremos Historia" de La Barca, Jal. Enrique Rojas Román y que se corrobora en el Perfil de Facebook de José Rojas Muñiz. https://web.facebook.com/10008401632794/videos/1889536314669738/?id=100008401632794&rdc=1&rdi		22 vehículos Gasolina de 22 vehículos Banderas blancas PES Camioneta Ford Ranger color oscuro con bocinas de perifoneo	(2) (5)
11	10 Mayo 2018	Recorrido casas por casa en la comunidad del Mito, del Candidato por la Coalición "Juntos Haremos Historia" de La Barca, Jal. Enrique Rojas Román, donde utilizaron banderas blancas y banderas moradas del PES además de lona en la avanzada. Publicado en el Perfil de Facebook de José Rojas Muñiz. https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1890651027891600&set=pcb.1890651711224865&type=3&theater		Banderas blancas PES Banderas moradas PES Lona de la avanzada de 2.5 x 1.5 mts.	(1) y (4)
12	11 Mayo 2018	Comienza la distribución de volantes y trípticos del Candidato por la Coalición "Juntos Haremos Historia" de La Barca, Jal. Enrique Rojas Román, en la comunidad de San Francisco de Rivas y se puede dar fe de ello en la página de Facebook en el perfil de y que se corrobora en el Perfil de José Rojas Muñiz. https://web.facebook.com/ph16foto.php?fbid=18912170		volante media carta papel couche tiraje 5000 pz tríptico una carta papel bond tiraje 5000pz	(2) (5)

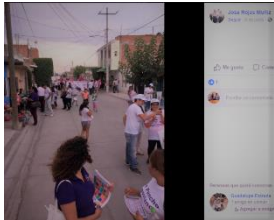



Consecutivo	TABLA "A"				
	FECHA	DESCRIPCION	FOTOGRAFIA	GASTO PRESUMIBLE	REFERENCIA
		3783134999&set=pcb.189121718451401651&type=3&theater			
13	12 Mayo 2018	Festejo del día de las madres donde rentaron local, renta de micrófono y bocinas y comida y refresco para 230 personas trípticos del Candidato por la Coalición "Juntos Haremos Historia" de La Barca, Jal. Enrique Rojas Román. Y se puede dar fe de ello en la página de Facebook y que se corrobora en el Perfil de José Rojas Muñiz. https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1891633794459990&set=pcb.1891634201126616&type=3&theater y en https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1891633667793336&set=pcb.1891634201126616&type=3&theater		Renta de salón Renta de mesas y sillas Comida y refresco para 250 personas Micrófono Bocinas	(5)
14	12 Mayo 2018	Caravana de 20 vehículos además de camioneta Nissan Frontier Blanca con bocinas para perifoneo. Del Candidato por la Coalición "Juntos Haremos Historia" de La Barca, Jal. Enrique Rojas Román en la comunidad de La Paz de Ordaz. Y se puede dar fe de ello en la página de Facebook y que se corrobora en el Perfil de José Rojas Muñiz. https://web.facebook.com/10008401632794/videos/1891654271124609/?id=10008401632794		Gasolina de 20 vehículos Perifoneo de camioneta Nissan Frontier Blanca	(2) (6) En términos del Considerando 2 de la presente Resolución se sobresee el procedimiento en cuanto a este concepto.
15	21 Mayo 2018	Visita de Andrés Manuel López Obrador a La Barca Jalisco, acompañado del Candidato por la Coalición "Juntos Haremos Historia" de La Barca, Jal. Enrique Rojas Román. Se puede dar fe en la página de Facebook y que se corrobora en el Perfil de José Rojas Muñiz. https://web.facebook.com/photo.php?fbid=971041779736903&set=pcb.971042336403514&type=3&theater			(ACATAMIENTO 2)

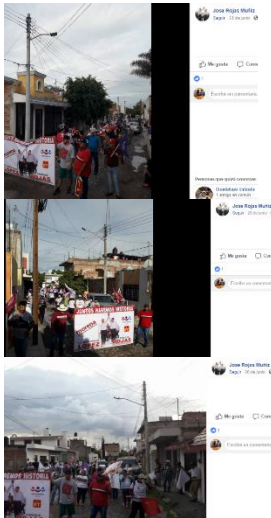



Consecutivo	TABLA "A"				
	FECHA	DESCRIPCION	FOTOGRAFIA	GASTO PRESUMIBLE	REFERENCIA
16	23 Mayo 2018	Visita a la colonia Ejidal, de la Barca, Jalisco, acompañado del Candidato por la Coalición "Juntos Haremos Historia" de La Barca, Jal. Enrique Rojas Román, Donde ya utilizaron camisas de manga larga bordadas por frente y atrás, paraguas blanco y morado de PES, playeras tintas de Morena, calcomanías para casa y vehículos y un nuevo Volante de couche media carta. Se puede dar fe en la página de Facebook y que se corrobora en el Perfil de José Rojas Muñoz. https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1896645580625478&set=pcb.1896645960625440&type=3&theater		Camisas manga larga bordada Calcomanías casa y vehículos Paraguas morado y blanco PES Playeras tinta MORENA	(1) y (4)
17	24 Mayo 2018	Visita en la comunidad de San José Casas Caídas, donde el Candidato por la Coalición "Juntos Haremos Historia" de La Barca, Jal. Enrique Rojas Román, utilizó una nueva lona en la avanzada de 1 x 3 mts, además de un nuevo volante con calendario. Se puede dar fe en Facebook y que se corrobora en el Perfil de José Rojas Muñoz. https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1896930703930299&set=pcb.1896931273930242&type=3&theater		Lona de avanzada nueva de 1 x 3 mts Volante de 1 carta papel couche con calendario de MORENA	(1) y (4)




Consecutivo	TABLA "A"				
	FECHA	DESCRIPCION	FOTOGRAFIA	GASTO PRESUMIBLE	REFERENCIA
					
18	25 Mayo 2018	<p>Visita en la colonia santa Cecilia donde el Candidato por la Coalición "Juntos Haremos Historia" de La Barca, Jal. Enrique Rojas Román, comienzan a utilizar chalecos morados del PES. Se puede dar fe en Facebook y que se corrobora en el Perfil de José Rojas Muñiz.</p> <p>https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1897613710528665&set=pcb.1897613973861972&type=3&theater</p>		Chalecos morados bordados del PES	(1)
19	26 Mayo 2018	<p>Visita a la comunidad de San Ramón, del Candidato por la Coalición "Juntos Haremos Historia" de La Barca, Jal. Enrique Rojas Román. Donde utilizan una nueva lona en la avanzada de 1.5 x 3 mts además de nuevas playeras blancas, se puede dar fe en Facebook, y que se corrobora en el Perfil de José Rojas Muñiz.</p> <p>https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1897769433846426&set=pcb.1897769453846424&type=3&theater</p>		Lona de avanzada de 1.5 x 3 mts Playeras blancas del PES PT MORENA	(1) y (4)




Consecutivo	TABLA "A"				
	FECHA	DESCRIPCION	FOTOGRAFIA	GASTO PRESUMIBLE	REFERENCIA
20	28 Mayo 2018	Visita en la comunidad del Carrasqueño donde el Candidato por la Coalición "Juntos Haremos Historia" de La Barca, Jal. Enrique Rojas Román, comienzan a regalar bolsas blancas del PES. Lo que se aprecia en el Facebook y en el perfil de José Rojas Muñiz. https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1898599893763380&set=pcb.1898600163763353&type=3&theater		Bolsas blancas PES	(1) y (4)
21	31 Mayo 2018	Visita en la comunidad del Tarengo, el Candidato por la Coalición "Juntos Haremos Historia" de La Barca, Jal. Enrique Rojas Román, comienzan a regalar mandiles blancos y gorros de tela tintos de Morena, como se puede checar en Facebook, y que se corrobora en el Perfil de José Rojas Muñiz. https://web.facebook.com/photo.php?fbid=189997996956903&set=pcb.189998396956863&type=3&theater		Mandiles blancos PES Gorros de tela tintos de morena	(2)
22	1 junio 2018	Mitin en la plaza de la comunidad de San Antonio de Rivas, donde, el Candidato por la Coalición "Juntos Haremos Historia" de La Barca, Jal. Enrique Rojas Román se puede dar fe en Facebook, y que se corrobora en el Perfil de Facebook de José Rojas Muñiz. https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1900244213598948&set=pcb.1900244303598939&type=3&theater		Bocinas micrófono	(4)
23	2 Junio 2018	En la visita a las lomas, el Candidato por la Coalición "Juntos Haremos Historia" de La Barca, Jal. Enrique Rojas Román, comienzan a utilizar banderas rojas del PT, así como chalecos tintos de morena, se puede dar fe en Facebook, y que se corrobora en el Perfil de José Rojas Muñiz. https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1900869360203100&set=pcb.1900869903536379&type=3&theater		Chalecos morados Morena Banderas del PT	(1)

Consecutivo	TABLA "A"				
	FECHA	DESCRIPCION	FOTOGRAFIA	GASTO PRESUMIBLE	REFERENCIA
24	3 Junio 2018	En la visita al mercado municipal, el Candidato por la Coalición "Juntos Haremos Historia" de La Barca, Jal. Enrique Rojas Román, comenzaron a utilizar camisas polo moradas del PES, se puede dar fe en Facebook, y que se corrobora en el Perfil de José Rojas Muñiz. https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1901077183515651&set=pcb.1901077266848976&type=3&theater		Camisas polo color morado PES	(1)
25	6 Junio 2018	Mitin en la comunidad del gobernador, el Candidato por la Coalición "Juntos Haremos Historia" de La Barca, Jal. Enrique Rojas Román, donde utilizaron nuevas camisas sublimadas con foto del candidato, así como playeras moradas del PES y bocinas y micrófono además de regalar aguas frescas, se puede dar fe en Facebook, y que se corrobora en el Perfil de José Rojas Muñiz. https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1902440936712609&set=pcb.1902441423379227&type=3&theater		Playeras blancas sublimadas con foto de candidato Playeras moradas PES Micrófono Bocina Aguas frescas	(5)
26	7 Junio 2018	Mitin en la comunidad de el Carmen donde el Candidato por la Coalición "Juntos Haremos Historia" de La Barca, Jal. Enrique Rojas Román utilizo micrófono y bocina. Se puede dar fe en Facebook, y que se corrobora en el Perfil de José Rojas Muñiz. https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1902444460045590&set=pcb.1902444663378903&type=3&theater		Micrófono bocina	(2)
27	9 Junio 2018	Rueda de prensa del Candidato por la Coalición "Juntos Haremos Historia" de La Barca, Jal. Enrique Rojas Román, y demás candidatos, lo cual se aprecia en el perfil de Facebook de José Rojas Muñiz. https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1903746636582039&set=pcb.1903746786582024&type=3&theater		Salón Mesas Aguas café	(2)



Consecutivo	TABLA "A"				
	FECHA	DESCRIPCION	FOTOGRAFIA	GASTO PRESUMIBLE	REFERENCIA
28	9 Junio 2018	Visita domiciliada donde el Candidato por la Coalición "Juntos Haremos Historia" de La Barca, Jal. Enrique Rojas Román, donde reparten nuevos volantes, uno tamaño carta con calendario a colores y otra media carta con imagen de boleta electoral, se puede dar fe en Facebook, y que se corrobora en el Perfil de José Rojas Muñiz. https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1903935759896460&set=pcb.1903936516563051&type=3&theater		Volante una carta couche con calendario a colores Volante media carta couche con imagen de boleta electoral	(2)
29	10 Junio 2018	Comida el Candidato por la Coalición "Juntos Haremos Historia" de La Barca, Jal. Enrique Rojas Román se puede dar fe en Facebook, y que se corrobora en el Perfil de José Rojas Muñiz. https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1904351706521532&set=pcb.1904352099854826&type=3&theater		Renta salón Comida y bebida para 150 personas	(5)
30	12 Junio 2018	En la visita a la comunidad de Villa Fuerte, Zalaméa el Candidato por la Coalición "Juntos Haremos Historia" de La Barca, Jal. Enrique Rojas Román, comenzó a repartir nuevos volantes. se puede dar fe en Facebook, y que se corrobora en el Perfil de José Rojas Muñiz. https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1904866666470036&set=pcb.1904866886470014&type=3&theater		Volantes media carta papel couche	(2)
31	18 Junio 2018	En la visita a la comunidad de Gabriel Leyva el Candidato por la Coalición "Juntos Haremos Historia" de La Barca, Jal. Enrique Rojas Román, repartió nuevos volantes de media carta. Se puede dar fe en Facebook, y que se corrobora en el Perfil de José Rojas Muñiz. https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1909924459297590&set=pcb.1909925892630780&type=3&theater		Nuevo volante media carta couche	(2)

Consecutivo	TABLA "A"				
	FECHA	DESCRIPCION	FOTOGRAFIA	GASTO PRESUMIBLE	REFERENCIA
32	19 Junio 2018	En la visita a la colonia Santa Mónica, el Candidato por la Coalición "Juntos Haremos Historia" de La Barca, Jal. Enrique Rojas Román, utilizo nuevas banderas de morena en blanco y tinto y del PT en blanco. Se puede dar fe en Facebook, y que se corrobora en el Perfil de José Rojas Muñiz. https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1910872465869456&set=pcb.1910874349202601&type=3&theater		Bandera blanca morena Bandera tinta morena Bandera blanca escudo PT	(2)
33	21 Junio 2018	Comienza el Candidato por la Coalición "Juntos Haremos Historia" de La Barca, Jal. Enrique Rojas Román, a repartir volantes de invitación al voto de MORENA, se puede dar fe en Facebook, y que se corrobora en el Perfil de José Rojas Muñiz. https://www.facebook.com/profile.php?id=100008401632794		Volante media carta Couche. Invitación al voto.	(4)
34	24 Junio 2018	Platica con los ejidatarios del Candidato por la Coalición "Juntos Haremos Historia" de La Barca, Jal. Enrique Rojas Román donde utilizaron, salón, mesas, sillas, bocina y micrófono. Se puede dar fe en Facebook, y que se corrobora en el Perfil de José Rojas Muñiz. https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1915649002058469&set=pcb.1915649142058455&type=3&theater		Salón Micrófono Bocinas Mesas Sillas	(2)
35	25 Junio 2018	En Facebook el Candidato por la Coalición "Juntos Haremos Historia" de La Barca, Jal. Enrique Rojas Román, comienza a hacer la invitación a su Gran Cierre de Campaña el día 26 de junio, en la plaza principal de La Barca, Jalisco y que se advierte en el perfil de José Rojas Muñiz, n el Facebook			(2)

Consecutivo	TABLA "A"				
	FECHA	DESCRIPCION	FOTOGRAFIA	GASTO PRESUMIBLE	REFERENCIA
		https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1916054388684597&set=a.1666065887016783.1073741830.100008401632794&type=3&theater			
36	25 Junio 2018	Visita al tianguis de la Magueyera donde el Candidato por la Coalición "Juntos Haremos Historia" de La Barca, Jal. Enrique Rojas Román, comienza a repartir nuevos volantes de papel couche media carta, se puede dar fe en Facebook, y que se corrobora en el Perfil de José Rojas Muñoz. https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1916567371966632&set=pcb.1916568091966560&type=3&theater		Volante media carta papel couche	(2)
37	26 Junio 2018	Caminata por Av. Hidalgo hacia la plaza Principal de La Barca, el Candidato por la Coalición "Juntos Haremos Historia" de La Barca, Jal. Enrique Rojas Román, donde utilizaron banda de viento, etc. Se puede dar fe en Facebook, y que se corrobora en el Perfil de José Rojas Muñoz. https://web.facebook.com/10008401632794/videos/1917268631896506/?id=10008401632794		Banda de Viento Camisas bordadas, Banderas PES, PT, MORENA Banderas gigantes moradas Globos matracas Playeras PES, MORENA,	(2) (6) En términos del Considerando 2 de la presente Resolución se sobresee el procedimiento en cuanto a este concepto.
38	26 Junio 2018	Gran cierre de campaña del Candidato por la Coalición "Juntos Haremos Historia" de La Barca, Jal. Enrique Rojas Román, donde utilizaron un escenario espectacular, tal y como se aprecia en el perfil de Facebook de José Rojas Muñoz. de https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1917044905252212&set=pcb.1917045198585516&type=3&theater https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1917276528562383&set=pcb.1917276781895691&type=3&theater https://web.facebook.com/photo.php?fbid=191782670184		Escenario de 17 mts. Equipo de sonido con 48 bocinas 3 pantallas LED de 3 mts. Ballet folclórico Banda Machos Camisas bordadas manga larga Playeras blancas PES Playeras Sublimadas PES Playeras tintas Morena Playeras moradas PES	(Acatamiento 1) (6) En términos del Considerando 2 de la presente Resolución se sobresee el procedimiento en cuanto a este concepto.

Consecutivo	TABLA "A"				
	FECHA	DESCRIPCION	FOTOGRAFIA	GASTO PRESUMIBLE	REFERENCIA
		0699&set=pcb.1917826945174008&type=3&theater			
39	26 junio 2018	CONTINUACION.		Banderas blancas PES Banderas moradas PES Banderas blancas Morena Banderas tintas Morena Banderas rojas PT Banderas blancas PES Globos	(Acatamiento 1)
40	1 Julio 2018	Desayuno y comida para las 186 personas que estuvieron de RC por la Coalición Juntos Haremos Historia por parte de Enrique Rojas Román en las 93 casillas que se instalaron en La Barca	Sin muestra	Desayuno Comida Bebidas Para 186 RC	(3)
41	Durante los 60 días de campaña	Bardas Pintadas por todo el municipio de la barca		Bardas detectadas 50	(5)
42	Durante los 60 días de campaña	CONTINUACION			(5)

Consecutivo	TABLA "A"				
	FECHA	DESCRIPCION	FOTOGRAFIA	GASTO PRESUMIBLE	REFERENCIA
					
43	Durante los 60 días de campaña	Lonas de vinil con Diputado federal		Lonas detectadas 67	(1)
44	Durante los 60 días de campaña	Lonas de vinil con Diputado Local		Lonas detectadas 40	(1)
45	Durante los 60 días de campaña	Lonas de vinil con Andrés Manuel López Obrador		Lonas detectadas 60	(1)
46	Durante los 60 días de campaña	Lonas de vinil con Andrés Manuel López Obrador Chicas		Lonas detectadas 50	(1)

Consecutivo	TABLA "A"				
	FECHA	DESCRIPCION	FOTOGRAFIA	GASTO PRESUMIBLE	REFERENCIA
47	Durante los 60 días de campaña	Repartieron 9 tipos de volantes: -Munícipe con AMLO -Munícipe con Gobernador -Munícipe con Dip Federal -Munícipe con Dip Local -Genérico calendario -Genérico con boleta electoral -Gene recio tamaño una carta con calendario con cuadritos a colores -Coalición candidatos Distrito 15 -Genérico de Morena vota 6 de 6 Varios de estos ejemplos ya mostrados anterior mente Triptico en papel bond de una carta		<p>Alrededor de 50,000 volantes entregados en todo el municipio de La Barca, Jal.</p> <p>Alrededor de 10,000 trípticos entregados en todo el municipio de La Barca, Jal.</p>	(4)
48	Durante toda la campaña	Calcomanías de vinil 30 x 10 para automóviles y casas		Alrededor de 2000 calcomanías pegadas en vehículos y casas de todo el municipio de La Barca.	(5)
49	Durante toda la campaña	Usaron y repartieron playeras -Blancas del PES -Blancas sublimadas de Munícipe -Tintas de Morena -Moradas del PES	Sin muestra	Alrededor de 2,000 playeras usaron y regalaron	(3)
50	Durante toda la campaña	Utilizaron y repartieron -Banderas blancas PES -Banderas moradas PES -Banderas Tintas Morena -Banderas Blancas Morena -Banderas rojas PT -Banderas Blancas PT -Banderas moradas gigantes	Sin muestra	Alrededor de 2,000 banderas usaron y repartieron	(3)
51	Durante toda la campaña	Usaron y repartieron Chalecos Morados del PES Chalecos Tintos de Morena	Sin muestra	Alrededor de 50 chalecos usaron y repartieron	(3)

Consecutivo	TABLA "A"				
	FECHA	DESCRIPCION	FOTOGRAFIA	GASTO PRESUMIBLE	REFERENCIA
52	Durante toda la campaña	Usaron el candidato, planilla y equipo de trabajo -Camisas manga larga Blancas con bordado al frente y atrás	Sin muestra	Alrededor de 50 camisas usaron	(3)
53	Durante toda la campaña	Usaron y repartieron -Camisas Polos Moradas del PES	Sin muestra	Alrededor de 40 camisas Polos moradas del PES	(3)
54	Durante toda la campaña	Usaron y repartieron -gorros de morena en color tinto	Sin muestra	Alrededor de 50 gorros de Morena tintos	(3)
55	Durante toda la campaña	Usaron y repartieron -Bolsas blancas del PES	Sin muestra	Alrededor de 500 bolsas repartieron por todo el municipio	(3)
56	Durante toda la campaña	Repartieron -Mandiles blancos del PES	Sin muestra	Alrededor de 500 Mandiles blancos del PES	(3)
57	Durante toda la campaña	Usaron y repartieron -sombrias blancas con morado PES	Sin muestra	Alrededor de 500 Sombrillas blancas con Morado del PES	(3)
58	Durante toda la campaña	Diario usaron vehículo con Perifoneo	Sin muestra	Alrededor de 240 horas de perifoneo	(5)

Con los elementos anteriormente mencionados, esta autoridad deberá determinar lo siguiente:

- Verificar el debido reporte de los ingresos o egresos efectuados por la contratación y pago de los conceptos visualizados en el material probatorio;
- En el supuesto de que el beneficio económico que implicó a la campaña electoral del candidato referido no se encuentre reportado por parte de los sujetos incoados, se procederá a cuantificar el monto involucrado al tope de gastos de campaña respectivo y se impondrá la sanción que corresponda.
- Por último, en el caso de no haber reportado los conceptos denunciados y acreditados, se ordenará seguimiento para que se sumen los gastos correspondientes al tope de gastos de campaña correspondiente para las elecciones correspondientes.

En este orden de ideas, a efecto de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización se deberán analizar, adminicular y valorar cada uno de los elementos aportados por la quejosa para acreditar su dicho, mismos que obran dentro del expediente de mérito, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.

Visto lo anterior, es preciso señalar que derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en que se actúa y a efecto de mayor claridad, resulta conveniente dividir en apartados el estudio de fondo del procedimiento de mérito.

Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que con el objeto de sistematizar la presente Resolución llevaron a esta autoridad electoral a analizar por separado cada uno de los conceptos de gasto denunciados y que se analizaron en el desarrollo de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de la autoridad electoral.

En este tenor, considerando los elementos aportados y las circunstancias especiales de cada caso, esta autoridad decidió dividir el presente estudio de fondo en los apartados siguientes, que corresponden a los hechos denunciados por la quejosa:

APARTADO A. Gastos por concepto de lonas, playeras y chalecos.

APARTADO B. Conceptos de gasto no acreditados por carecer de elementos probatorios o teniéndolos, éstos no resultan idóneos para acreditar los hechos denunciados.

(...)³

APARTADO H. Consideraciones derivadas del acatamiento de la sentencia SG-RAP-228/2018 y acumulados.

Señalado lo anterior, se procede a abordar el análisis de cada uno de los apartados aludidos:

APARTADO A. Gastos por concepto de lonas, playeras y chalecos.

En el presente apartado, se analizarán los gastos denunciados por la quejosa de conformidad con los hechos narrados en el escrito de queja, por concepto de lonas, playeras y chalecos, identificados con **(1)** en la columna “Referencia” de la “**Tabla A**” que antecede, respecto a las cuales presentó como medio probatorio fotografías obtenidas de la red social Facebook, así como links que presuntamente corresponden a las páginas consultadas.

Sobre el particular, de la valoración a las fotografías presentadas por la quejosa como medios probatorios, no es posible advertir de manera clara el contenido de la propaganda aludida a efecto de emitir un pronunciamiento respecto a la existencia de expresiones que favorezcan o promuevan de algún modo a los sujetos incoados,

³ De conformidad con lo ordenado en la sentencia SG-RAP-228/2018 y acumulados, todo lo anterior no fue materia de revocación, por lo que queda en los términos originalmente establecidos en el acuerdo INE/CG884/2018.

aunado a que las imágenes no aportan elementos cualitativos ni cuantitativos que permitan contar con parámetros objetivos en la determinación de un beneficio económico.

Lo anterior, toda vez que la quejosa se limita a señalar un número determinado de playeras, lonas y chalecos sin proporcionar elementos que generen certeza a esta autoridad electoral de su existencia, pues como se advierte de las fotografías y videos presentados, únicamente es posible observar un número mínimo de conceptos, evidentemente inferior al referido en el escrito de queja inicial.

Así, de conformidad con valor convictivo con el que cuentan las pruebas técnicas, para dotarlas de mayor solidez es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y circunstancias que se pretenden demostrar, en virtud de su carácter imperfecto, ya que son susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad

No obstante, en apego al principio de exhaustividad que rige el actuar de esta autoridad fiscalizadora, a efecto de contar con mayores elementos respecto a la propaganda denunciada, se realizó una consulta en el Sistema Integral de Fiscalización, a la contabilidad del C. Enrique Rojas Román, y se procedió a descargar las pólizas contables que soportaron su informe de campaña, mismas que a continuación se detallan:

Candidato	Número de póliza	Periodo de operación	Tipo de póliza	Subtipo póliza	Descripción de la póliza	Total cargo	Soporte documental
Enrique Rojas Román	3	2	CORRECCION	DIARIO	REGISTRO DE GASTO DE PLAYERAS Y GORRAS	\$ 6,947.74	Factura Contrato Cédula de prorrateo
Enrique Rojas Román	2	2	CORRECCION	DIARIO	GASTO CHALECOS Y GORRAS	\$ 3,275.36	Factura Contrato Cédula de prorrateo
Enrique Rojas Román	1	2	NORMAL	DIARIO	TRANSFERENCIA DE GASTOS LONA IMPRESA	\$ 3,955.87	Factura Contrato Cédula de prorrateo Evidencias

Sobre el particular, es importante señalar que como se muestra en el cuadro inmediato anterior, el sujeto incoado omitió presentar las muestras fotográficas de las playeras, lonas y chalecos adquiridos y reportados en las pólizas antes descritas; por tal razón, esta autoridad no tiene certeza en cuanto a si corresponden a aquellas denunciadas por la quejosa.

En este orden de ideas, al conciliar los conceptos denunciados materia del presente apartado, contra los registros existentes en el Sistema Integral de Fiscalización, se advirtió el reporte por parte de los sujetos incoados, tal y como ha quedado precisado en el cuadro que antecede, de los gastos consistentes en playeras, chalecos y lonas.

Es importante destacar que del universo de conceptos analizados en el presente apartado, no escapa a la atención de esta autoridad que, en algunos conceptos

denunciados, la cantidad o la calidad referida por la quejosa no puede ser conciliada de manera exacta con lo reportado en el citado Sistema, sin embargo, es importante recalcar que la quejosa se limita a señalar medidas sin contar con elementos objetivos, que otorguen a esta autoridad la certeza que dichos conceptos tienen dichas propiedades.

Adicionalmente, esta autoridad considera que en las fotografías no es posible adjudicar la conducta denunciada, consistente en la entrega de la propaganda aludida por el quejoso, a los ahora incoados, ya que sólo se advierten eventos aislados sin poder generar un nexo circunstancial entre el candidato, las fechas en las que presuntamente se entregaron los conceptos visualizados en los medios probatorios y los hechos narrados.

Al respecto, si bien de conformidad con lo dispuesto por el numeral 15, numeral 3, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta autoridad cuenta con la facultad de allegarse de los elementos de convicción que estime pertinentes para integrar y sustanciar los expedientes, la misma es una atribución de carácter discrecional, toda vez que la carga de la prueba le corresponde al denunciante.

Bajo esa línea argumentativa, la norma resulta clara al establecer en el artículo 29, numeral 1, fracción V, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que toda queja deberá presentarse por escrito, adjuntando los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de los medios de convicción que no estén a su alcance y que se encuentren en poder de cualquier autoridad, de lo cual se deriva que la carga de la prueba le corresponde al quejoso.

Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 12/2010, misma que a continuación se transcribe para mayor referencia:

“CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la interpretación de los artículos 41, Base III, apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que, en el procedimiento especial sancionador, mediante el cual la autoridad administrativa electoral conoce de las infracciones a la obligación de abstenerse de emplear en la propaganda política o electoral que se difunda en radio y televisión, expresiones que denigren a las instituciones, partidos políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga de la prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber aportarlas desde la presentación de la denuncia, así como identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; esto con independencia de la facultad investigadora de la autoridad electoral.”


Es preciso señalar que, aunado a los requisitos que señalan el artículo 29 del Reglamento de Fiscalización, en las quejas relacionadas con campaña, la normatividad es más rigurosa respecto a los indicios que deben de tener los escritos que pretendan acreditar la veracidad de los hechos denunciados en los mismos, tan es así, que el artículo 41, numeral 1, inciso e, establece que además de los requisitos previstos en el artículo anteriormente citado, los escritos de queja por hechos que presuntamente vulneren la normatividad en materia de fiscalización **dentro de los Procesos Electorales**, deberán estar acompañados por las pruebas que permitan acreditar la veracidad de los hechos denunciados.

En otras palabras, los procedimientos administrativos sancionadores que están vinculados con los Procesos Electorales son regulados en un capítulo especial, en virtud de que tienen una sustanciación específica y sumaria, atendiendo a los plazos a los que están regulados dichos procedimientos.

Consideraciones derivadas del acatamiento de la sentencia SG-RAP-228/2018 y acumulados.

Ahora bien, en cumplimiento a lo ordenado por la H. Sala Regional con sede en Guadalajara al resolver el recurso de apelación SG-RAP-228/2018 y acumulados y acumulados, esta autoridad procedió a requerir a los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, integrantes de la otrora coalición “Juntos Haremos Historia”, las muestras fotográficas de las lonas, playeras y chalecos reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, específicamente en el Informe de Campaña del C. Enrique Rojas Román.

Consecuentemente, el partido Encuentro Social remitió las muestras fotográficas atinentes a los chalecos registrado contablemente, por lo que esta autoridad procedió a realizar la conciliación respectiva como se detalla a continuación:

CONSECUTIVO	TABLA “B”				
	FECHA	CONCEPTO DENUNCIADO	FOTOGRAFIA	REFEREN CIA TABLA “A”	MUESTRA PRESENTADA POR EL PARTIDO
18	25 May o 2018	Chalecos morados bordados del PES		(1)	

Derivado de lo anterior, se puede concluir que el gasto correspondiente a los chalecos denunciados fue reportado en el Sistema Integral de Fiscalización oportunamente por el sujeto incoado.

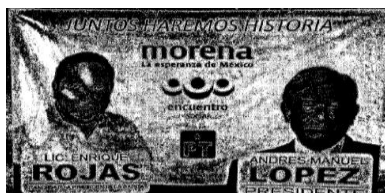
En consecuencia, esta autoridad se allegó de los elementos que se desprendieron de los hechos y pruebas proporcionados por la quejosa; sin que de ello se lograra advertir alguno que permitiera acreditar el incumplimiento de obligaciones en materia de fiscalización por parte de los sujetos incoados.

Es así que, del estudio realizado al referido Sistema, por lo que se refiere al entonces candidato incoado, el C. Enrique Rojas Román, se concluye que en el Sistema Integral de Fiscalización se encuentran registrados los gastos denunciados por concepto de chalecos.

Por lo anterior, es de concluir que esta autoridad cuenta con elementos que generan certeza respecto del reporte de los conceptos descritos en la columna “Gastos reportados en el Sistema Integral de Fiscalización” del cuadro que antecede; razón por la cual, esta autoridad tiene certeza que la propaganda denunciada corresponde a lo reportado por los sujetos incoados en la póliza 2, sin embargo, la muestra fue presentada por el partido en físico y no a través del Sistema Integral de Fiscalización en el periodo correspondiente, vulnerando el artículo 205 del Reglamento de Fiscalización como lo señala la Sala Regional Guadalajara en su ejecutoria.

Ahora bien, por lo que se refiere a los gastos atinentes a las playeras y lonas objeto de denuncia, identificados con (1) en la columna “Referencia” de la Tabla “A” del presente estudio de fondo, es preciso mencionar que esta autoridad requirió a los partidos políticos incoados y a los proveedores respectivos a efecto de que remitieran las muestras fotográficas de la propaganda reportada en el Sistema Integral de Fiscalización.

Consecuentemente, el partido Morena remitió las muestras fotográficas atinentes a las lonas registradas contablemente, por lo que esta autoridad procedió a realizar la conciliación respectiva de la muestra que presentó dicho partido político con las fotográficas presentadas por la quejosa en su escrito de queja, las cuales están referenciadas con los consecutivos 5, 11, 17, 19, 43, 44, 45, 46 y 48, observando que la misma no coincide con lo denunciado, a continuación se inserta lo presentado por Morena:



En consecuencia, esta autoridad instructora contó con los siguientes elementos:

- En el Sistema Integral de Fiscalización se verificó el debido reporte de los conceptos denunciados por el quejoso.
- De la documentación que obra en el Sistema Integral de Fiscalización y del requerimiento hecho a los sujetos obligados no obran las muestras de la propaganda registrada en las pólizas correspondientes.

Por lo tanto, esta autoridad no cuenta con la certeza de que la propaganda debidamente reportada sea diferente a la denunciada en la queja me merito, aunado a que el quejoso no aportó mayores pruebas que pudieran sostener lo contrario.

Por lo tanto, no existen elementos que permitan concluir que los gastos denunciados no fueron reportados en el Informe de Campaña del C. Enrique Rojas Román, toda vez que de las diligencias realizadas no se obtuvieron pruebas suficientes para acreditar con certeza el registro contable de las erogaciones objeto de investigación.

En esa tesitura, ante la duda razonable sobre el particular, debe aplicarse a favor de los incoados el principio jurídico “*in dubio pro reo*”, reconocido por el derecho administrativo sancionador en materia electoral.

A mayor abundamiento, resulta aplicable el criterio vertido en la siguiente Jurisprudencia:

DUDA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. El aforismo ‘*in dubio pro reo*’ no tiene más alcance que el consistente en que en ausencia de prueba plena debe absolverse al acusado. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Parte: 75, marzo de 1994. Tesis: VII. P. J/37. Página: 63.

Asimismo, sirve como sustento de la aplicabilidad del principio de “*in dubio pro reo*”, dentro de los procedimientos administrativos, la tesis siguiente:

DUDA SOBRE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. MULTAS. Al no ser razonable que una infracción se haya cometido, tratándose de multas por violación a las disposiciones administrativas legales, resulta aplicable el principio jurídico *in dubio pro reo*. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Parte: 33 Sexta. Parte Tesis: Página: 24.

También resultan aplicables las siguientes tesis relevantes identificadas con las claves LIX/2001 y XVII/2005, respectivamente, de la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo y rubro y texto son al tenor siguiente:

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- De la interpretación de los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8o., apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por nuestro país en términos del 133 de la Constitución federal, aplicados conforme al numeral 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que el principio de presunción de inocencia que informa al sistema normativo mexicano, se vulnera con la emisión de una Resolución condenatoria o sancionatoria, sin que se demuestren suficiente y fehacientemente los hechos con los cuales se pretenda acreditar el supuesto incumplimiento a las disposiciones previstas en las legislaciones. Lo anterior en razón de que dicha presunción jurídica se traduce en un derecho subjetivo de los gobernados a ser considerados inocentes de cualquier delito o infracción jurídica, mientras no se presente prueba bastante que acredite lo contrario, en el entendido que, como principio de todo Estado constitucional y democrático de derecho, como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo al ámbito del proceso penal sino también cualquier Resolución, tanto administrativa como jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio o limitativo de los derechos del gobernado.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- La presunción de inocencia es una garantía del acusado de una infracción administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o participación en los hechos imputados. A través de esta garantía se exige, que las autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los elementos con grado suficiente de convicción sobre la autoría o participación en los mismos del indiciado, para lo cual deberán realizarse todas las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y de aptitud media requerida para ocupar el cargo desempeñado por la autoridad investigadora, y que esto se haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las posibilidades racionales de la investigación, de modo que, mientras la autoridad sancionadora no realice todas las diligencias necesarias en las condiciones descritas, el acusado se mantiene protegido por la presunción de inocencia, la cual desenvuelve su protección de manera absoluta, sin verse el indiciado en la necesidad de desplegar actividades probatorias en favor de su inocencia, más allá de la estricta negación de los hechos imputados, sin perjuicio del derecho de hacerlo; pero cuando la autoridad responsable cumple adecuadamente con sus deberes y ejerce en forma apropiada sus poderes de investigación, resulta factible superar la presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y exhaustiva de los indicios encontrados y su enlace debido, y determinando, en su caso, la autoría o participación del inculpado, con el material

obtenido que produzca el convencimiento suficiente, el cual debe impeler al procesado a aportar los elementos de descargo con que cuente o a contribuir con la formulación de inferencias divergentes, para contrarrestar esos fuertes indicios, sin que lo anterior indique desplazar el onus probandi, correspondiente a la autoridad, y si el indiciado no lo hace, le pueden resultar indicios adversos, derivados de su silencio o actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria de una persona imputada cuya situación se pone en peligro con la acumulación de pruebas incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la adopción de una conducta activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses, encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones racionales encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de medios probatorios para acreditar su inocencia.

Cabe destacar, que el principio *in dubio pro reo*, en sentido negativo, prohíbe a una autoridad o tribunal condenar al acusado si no obtiene la certeza sobre la verdad de la imputación. Ahora bien, la exigencia positiva de dicho principio obliga a absolver al acusado al no obtener la certeza que implique acreditar los hechos por los que se procesa a un individuo.

Asimismo, cabe advertir que el principio en comento es un beneficio para el sujeto imputado en el caso que exista la duda del juzgador frente a las pruebas que obran dentro del expediente, por lo que si en el estudio del presente asunto no se acredita de manera fehaciente la presunta infracción cometida por el sujeto incoado, al no existir prueba plena que corrobore los hechos imputados, esta autoridad, siguiendo los principios que rigen el *ius puniendi* se encuentra imposibilitada para emitir una resolución condenatoria.

En este sentido, en nuestro sistema jurídico prevalece el principio de presunción de inocencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 16, con relación al 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano e integrados al orden jurídico mexicano en términos de lo dispuesto en el artículo 133 constitucional, a saber, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente en la República desde el veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y uno (artículo 14, apartado 2), y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vigente en la República desde el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta (artículo 8, apartado 2).

En los procedimientos sancionadores electorales, tal presunción de inocencia se traduce en el derecho subjetivo de los partidos políticos denunciados a ser considerados inocentes de cualquier infracción, mientras no se presente prueba bastante para derrotarla y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio. En este sentido, la máxima *in dubio pro reo* (presunción de inocencia) obliga a absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del acusado.

Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis relevante emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se transcribe a continuación:

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.—El artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8º, apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en forma de juicio, consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en la medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los gobernados.

Recurso de apelación. SUP-RAP-71/2008.—Actor: Partido Verde Ecologista de México.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—2 de julio de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constanancio Carrasco Daza.—Secretario: Fabricio Fabio Villegas Estudillo.”

Por consiguiente, esta autoridad al no tener certeza en cuanto al reporte de los gastos en el Sistema Integral de Fiscalización y ante la imposibilidad de determinar un beneficio cierto con base en criterios objetivos apegados a las disposiciones normativas que rigen la materia, el procedimiento de mérito debe declararse **infundado** por lo que se refiere a la omisión de reportar los gastos en mención en el Informe de Campaña del C. Enrique Rojas Román.

Como se puede desprender la muestra fotográfica no corresponde con las denunciadas por la quejosa.

Ahora bien, no escapa a la atención de esta autoridad fiscalizadora que el sujeto incoado, si bien es cierto que realizó el debido reporte de los gastos por propaganda adquirida en el Sistema Integral de Fiscalización, también lo que incurrió en una infracción a la normatividad electoral por el hecho de no presentar las fotografías de la propaganda adquirida a través del Sistema Integral de Fiscalización, conforme lo señala el artículo 205 del Reglamento de Fiscalización, el cual a la letra señala:

“Artículo 205.

Muestras de propaganda utilitaria

1. Los partidos, coaliciones, precandidatos, aspirantes, candidatos y candidatos independientes, deberán conservar y presentar muestras de la propaganda cuando la Unidad Técnica lo solicite y deberán incorporar en el Sistema de Contabilidad en Línea, una imagen de las muestras referidas.”

Al respecto, la H. Sala Regional con sede en Guadalajara al resolver el recurso de apelación SG-RAP-228/2018 y acumulados, lo que a continuación se transcribe:

“...En ese sentido, fue indebido el razonamiento de la responsable al señalar que al no adjuntarse no se tenía certeza si correspondía a las referidas en la denunciada, pues se advertía el incumplimiento a una obligación legal de fiscalización.

Ello, porque no quedaba al arbitrio de la responsable allegarse de documentación conforme al artículo 15, párrafo 3, del RPSMF, sino que debía requerir al denunciado o a quien considere idóneo, pues el artículo aplicable era el 205 del RF (muestras de propaganda utilitaria), al disponer que los partidos, coaliciones, precandidatos, aspirantes, candidatos y candidatos independientes, deberán conservar y presentar muestras de la propaganda cuando la UTF lo solicite y deberán incorporar en el Sistema de Contabilidad en Línea, una imagen de las muestras referidas.

Sin que sea óbice el razonamiento de la responsable sobre la carga mínima probatoria, pues fue ella quien introdujo los elementos objeto de controversia, y en un congruente apego al principio de exhaustividad, debió conciliar los datos y complementarlos o completarlos a fin de resultar idóneos para el procedimiento sancionador.

De esta manera, debió requerirse por dichas fotografías, con independencia de la posible sanción o no derivado del incumplimiento al RF...”

En consecuencia, tomando en consideración los argumentos y conclusiones a las que arribo el órgano jurisdiccional, esta autoridad determina que la otrora coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, así como su entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de la Barca en el estado de Jalisco, C. Enrique Rojas Román, vulneraron lo dispuesto en el artículo 205 del Reglamento de Fiscalización.

No obstante, lo anterior, si bien existe una conducta infractora de la normatividad electoral que debería ser reprochada por esta autoridad administrativa, también es cierto que en el caso en concreto realizar tal reproche no resulta procedente al tenor de las consideraciones que se exponen a continuación:

1. Garantía de audiencia.

En el caso, se destaca que el presente Acuerdo se emite únicamente para acatar los efectos de la sentencia identificada con la clave alfanumérica SG-RAP-228/2018 y acumulados, por lo que, si bien es cierto en el marco de la sustanciación del procedimiento que por esta vía se modifica, se dio garantía de audiencia a los sujetos incoados al emplazarlos y notificarles la etapa de alegatos, también los es que respecto a la conducta acreditada, no se dio garantía de audiencia a los sujetos denunciados por lo que hace a la conducta materia del presente apartado, en consecuencia, al realizar una afectación a la esfera jurídica de dichos sujetos atentaría con lo dispuesto a los artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior, se robustece con la Jurisprudencia 20/2013, con rubro **GARANTÍA DE AUDIENCIA. DEBE OTORGARSE POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS**, que a la letra señala:

Margarita Padilla Camberos y otros
VS
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

Jurisprudencia 20/2013

GARANTÍA DE AUDIENCIA. DEBE OTORGARSE POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 14, 16, 41, Base IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23, párrafo 1, 27 y 38, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que la garantía del debido procedimiento es un derecho fundamental y que los partidos políticos, en tanto entidades de interés público, con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la Constitución federal y en las leyes reglamentarias, deben respetar los derechos fundamentales de sus militantes, para lo cual están obligados a incluir en sus Estatutos procedimientos que cumplan con las garantías procesales mínimas. En esas condiciones, la garantía de audiencia debe observarse por los partidos políticos, previo a la emisión de cualquier acto que pudiera tener el efecto de privar a sus afiliados de algún derecho político-electoral, constitucional, legal o estatutario, en la que tengan la posibilidad de ser oídos y vencidos en el procedimiento, con la oportunidad de aportar elementos de prueba para una adecuada defensa.

Quinta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
SUP-JDC-851/2007 .—Actores: Margarita Padilla Camberos y otros.—
Responsable: Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional.—1 de

agosto de 2007.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretario: Héctor Rivera Estrada.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. *SUP-JDC-286/2008*.—Actor: Hipólito Rigoberto Pérez Montes.—Responsable: Comisión de Orden del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional.—23 de abril de 2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Sergio Dávila Calderón.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. *SUP-JDC-475/2008*.—Actora: Claudia Edith Neri Sánchez.—Responsable: Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Jalisco.—10 de julio de 2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Ernesto Camacho Ochoa y Erik Pérez Rivera.

Notas: Los preceptos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales interpretados en el primer precedente, son anteriores a la reforma legal publicada el 14 de enero de 2008, en el Diario Oficial de la Federación.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el catorce de agosto de dos mil trece, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 45 y 46.

Así, de la transcripción anterior, se desprende que previo a la emisión de un acto de molestia o afectación la autoridad debe hacer de su conocimiento a los involucrados a efecto de que estos tengan la posibilidad de ser oídos y vencidos en el procedimiento, con la oportunidad de aportar elementos de prueba para una adecuada defensa, lo cual en el caso en concreto no aconteció, de ahí que resulte inviable que esta autoridad administrativa imponga una sanción a los sujetos incoados.

2. Principio non reformatio in peius

Cabe mencionar que, si bien se constata la existencia de dos pólizas con los gastos por concepto de registro de playeras, chalecos y lonas impresas, no se cuenta con la totalidad de la documentación soporte, es decir, las muestras de dicha propaganda electoral, de conformidad con la normatividad electoral. Esto es, en el presente caso si bien existe el reporte en el Sistema Integral de Fiscalización a través de las pólizas números 2 y 3 del periodo de corrección y 1 del segundo periodo normal, el sujeto obligado omitió adjuntar las muestras a las que estaba obligado a presentar a través

del Sistema Integral de Fiscalización; razón por la cual, en el presente caso se actualiza una omisión de presentar las muestras por parte de los sujetos obligados.

No obstante lo anterior, en observancia al principio *non reformatio in peius*⁴ que se traduce en que la resolución recurrida no debe ser modificada en perjuicio del reo, esta autoridad no puede derivado de un recurso de apelación sancionar una conducta de naturaleza distinta a la originalmente sancionada en la resolución que por esta vía se acata, pues ello afectaría su esfera jurídica del sujeto obligado. Resulta aplicable al caso lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-004/2006.

Adicionalmente, a fin de tutelar el derecho de garantía de audiencia de los enjuiciantes, establecido en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable debe notificar y requerir a cada sujeto obligado para que subsane la omisión en que han incurrido, por lo que durante el procedimiento de fiscalización las notificaciones relacionadas con las observaciones de los errores y omisiones, deben realizarse a los sujetos obligados, el cual tiene la obligación de aclarar o subsanar dichas cuestiones.

Es importante señalar que de conformidad con el nuevo modelo de fiscalización así como el establecimiento de derechos y obligaciones respectivas a cada uno de los sujetos obligados, se especifica que por lo que hace a la conducta en análisis y de conformidad con los artículos 443, numeral 1, inciso c) y 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el manejo de los recursos así como su debido control es responsabilidad del partido y de los candidatos en cuestión.

Entonces, si durante el procedimiento de fiscalización o derivado del procedimiento de queja que por esta vía se acata, no fue hecha del conocimiento por parte de la autoridad fiscalizadora (falta de forma al omitir presentar las muestras correspondientes), tampoco fue posible notificar y requerir a cada sujeto obligado para que formulara las manifestaciones que a su derecho convengan, en consecuencia el sujeto obligado no tuvo oportunidad de exponer sus posiciones, argumentos y alegatos, ni de ofrecer y aportar los medios de convicción que estimara pertinentes para su defensa.

En este sentido sería violatorio sancionar a la otrora Coalición “Juntos Haremos Historia” por la irregularidad ahora detectada, por lo que a fin de respetar las

⁴ Ello con base en la Tesis Aislada, Semanario de la Suprema Corte de Justicia, Sexta Época, Primera Sala, Segunda Parte, VI, pág. 99, de rubro: APELACION EN MATERIA PENAL (NON REFORMATIO IN PEIUS), la cual refiere que por ningún motivo la sanción podrá ser mayor a la recurrida en el medio de impugnación, conforme al principio *non reformatio in peius* (no reformar en perjuicio), en tanto que la resolución recurrida no debe ser modificada en detrimento del imputado, por lo que el nuevo fallo no debe ser más gravoso que el antiguo.

formalidades que rigen el debido proceso y, por ende, la garantía de audiencia del apelante, pese a que la omisión versa en adjuntar la totalidad de la documentación comprobatoria de gastos, en atención al principio *non reformatio in peius* esta autoridad determina que en el caso concreto lo procedente es que **la observación quede sin efectos.**

APARTADO B. Conceptos de gasto no acreditados por carecer de elementos probatorios o teniéndolos, éstos no resultan idóneos para acreditar los hechos denunciados.

(...)⁵

En otro orden de ideas, respecto a los hechos denunciados identificados con **(3)** en la **Tabla “A”**, es importante destacar que la quejosa no presentó ningún medio de prueba, y en otros a pesar que presentó algunas fotografías, de estas no se desprenden elementos que aún con carácter indiciario, permitieran a esta autoridad constatar su dicho.

(...)⁶

Consideraciones derivadas del acatamiento de la sentencia SG-RAP-228/2018

Ahora bien, en cumplimiento a lo ordenado por la H. Sala Regional con sede en Guadalajara al resolver el recurso de apelación SG-RAP-228/2018, esta autoridad procedió a valorar **las manifestaciones realizadas por el C. Enrique Rojas Román** en respuesta al emplazamiento, referentes al evento denunciado por la quejosa de fecha 21 de mayo del 2018, identificado como **(Acatamiento 2)** en la columna “Referencia” de la Tabla “A” del presente estudio de fondo, mismas que a continuación se transcriben:

*“...Por otra parte, cabe señalar, que el día 21 de mayo del año en curso, en la Plaza Principal de La Barca, Jalisco, hubo un evento de campaña del Candidato a Presidente de la República por la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, y en el que fui **invitado** a subir al templete junto con más candidatos, sin hacer uso de la voz, circunstancia que fue debidamente monitoreada por personal del Instituto Nacional Electoral...”*

[Énfasis añadido]

⁵ De conformidad con lo ordenado en la sentencia SG-RAP-228/2018 y acumulados, todo lo anterior no fue materia de modificación, por lo que queda en los términos originalmente establecidos en el acuerdo INE/CG884/2018.

⁶ De conformidad con lo ordenado en la sentencia SG-RAP-228/2018 y acumulados, todo lo anterior no fue materia de modificación, por lo que queda en los términos originalmente establecidos en el acuerdo INE/CG884/2018.

Sobre el particular, la quejosa denunció en su escrito el evento en los términos que a continuación se transcriben:

FECHA	DESCRIPCION	FOTOGRAFIA	GASTO PRESUMIBLE
21 Mayo 2018	Visita de Andrés Manuel López Obrador a La Barca Jalisco, acompañado del Candidato por la Coalición "Juntos Haremos Historia" de La Barca, Jal. Enrique Rojas Román. Se puede dar fe en la página de Facebook y que se corrobora en el Perfil de José Rojas Muñiz. https://web.facebook.com/photo.php?fbid=971041779736903&set=pcb.971042336403514&type=3&theater		

En ese tenor, como quedó establecido en la Resolución primigenia, el denunciante no aportó elementos probatorios idóneos a efecto de sustentar su queja, toda vez que presentó fotografías y una liga de internet de la red social "Facebook" identificada bajo el perfil de "Alejandrina Ortiz Talavera", es decir, la publicación aludida no fue realizada por el entonces candidato y se desconoce la vinculación existente entre la persona que publicó las fotografías en mención, las cuales por sí solas no acreditan los hechos que el quejoso pretende comprobar.

Aunado a lo anterior, como se advierte del cuadro antes transcrito, el quejoso refiere únicamente una visita realizada por el entonces candidato a la Presidencia de la República el C. Andrés Manuel López Obrador, sin establecer en la columna denominada "gasto presumible" los hechos o conceptos de gasto que pretende acreditar con las fotografías presentadas.

Al respecto, es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los criterios sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación toda vez que, en razón de su naturaleza, por sí mismas las pruebas técnicas no acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma.

Esto resulta de capital importancia en la resolución de la presente queja, en virtud que, como hemos visto, la naturaleza de los medios de prueba que aporta, por sí solos, generan un nivel de convicción muy débil en el órgano que las somete a valoración. Aunado a lo anterior, otro elemento para determinar la fuerza probatoria de los elementos aportados reside en la idoneidad de la prueba. Al respecto, cabe

señalar que la idoneidad consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que pretende demostrar. De ahí la trascendencia sobre la pretensión de la quejosa de presentar las pruebas técnicas que obran en el expediente como medio idóneo para probar dos cuestiones distintas: el rebase del tope de gastos de precampaña y la comprobación del gasto realizado.

De tal suerte, las pruebas que obran en el expediente de mérito constituyen indicios, en todo caso, de los gastos realizados mismos que debieron ser registrados en los respectivos informes de campaña. Así las cosas, no obstante, la naturaleza imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas y el escaso valor probatorio que configuran por sí solas, en atención al principio de exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral ha determinado valorar todas y cada una de las pruebas aportadas por la quejosa, las cuales generan un valor indiciario respecto de los hechos que se denuncian.

Por lo anterior, considerando lo manifestado por el C. Enrique Rojas Román respecto a su asistencia al evento con carácter de **invitado** y sin hacer uso de la voz, no obran en el expediente elementos que permitan establecer que existió un beneficio cuantificable para el entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de La Barca, Jalisco.

No obstante, y en acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara, esta autoridad solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros que informara si el evento en mención había sido reportado o sujeto a visita de verificación, así como objeto de observación o sanción en el marco de la revisión a los Informes de Campaña del Proceso Electoral Federal 20172018 o Local Ordinario concurrente en el estado de Jalisco.

En consecuencia, la citada dirección informó a esta autoridad que el evento referido fue reportado en el Sistema Integral de Fiscalización, en la agenda de eventos del otrora candidato al cargo de Presidente de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador y los gastos respectivos en el Informe de Campaña del citado candidato.

Por lo antes expuesto, es dable concluir que el evento fue organizado en beneficio del candidato a la Presidencia de la República postulado por la otrora coalición “Juntos Haremos Historia”, razón por la cual, no se desprenden elementos suficientes para afirmar que el C. Enrique Rojas Román se encontraba obligado a reportar en su agenda el evento en mención ni que permitan arribar a la determinación de un beneficio a su campaña.

En razón de lo vertido anteriormente, se considera que no existen elementos que otorguen a esta autoridad la certeza de la configuración de una conducta infractora de la normatividad aplicable en materia de origen, destino y aplicación de recursos

de los partidos políticos, por ello, el presente sub- apartado debe declararse **infundado**.

(...)⁷

APARTADO H. Consideraciones derivadas del acatamiento de la sentencia SG-RAP-228/2018.

a) Reporte de gastos en los eventos de campaña

Respecto al evento denunciado realizado en 21 de mayo de 2018, se da cumplimiento a la sentencia de mérito modificando la parte conducente del **Apartado B** de la Resolución primigenia, en el cual se hace la valoración de las manifestaciones del actor, el C. Enrique Rojas Román en conjunto con las pruebas aportadas por el denunciante, y el cual fue declarado **infundado**.

Ahora bien, en cumplimiento a lo ordenado por la H. Sala Regional Guadalajara respecto a lo atinente al evento de cierre de campaña de fecha 26 de junio de 2018 con la modificación del **Considerando 2** de la presente Resolución, se **sobreseyó** lo concerniente al no reporte de gastos por tratarse de hechos respecto a los cuales la autoridad se pronunció en el Dictamen Consolidado de la Revisión de Informes de Campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco.

b) Omisión de reportar eventos en la agenda de actos públicos.

Por lo que se refiere al reporte de eventos en la agenda del otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de La Barca, Jalisco, el C. Enrique Rojas Román, la autoridad jurisdiccional, al resolver el recurso de apelación SG-RAP-228/2018 y acumulados, determinó lo siguiente:

“...Por último, respecto a la omisión de valorar la falta de registro de agenda de eventos derivados de los informes de gastos de campaña es fundado.

Según se desprende del escrito de queja, MC señaló que debieron reportarse diversos actos de campaña por el candidato denunciado, tomando en cuenta las redes sociales, pero además ofreció el contenido del Formato ‘IC-COA’, anexando entre otras constancias, una impresión (a foja 43 del cuaderno accesorio único) de lista de reportes. Dicha situación no fue abordada por la responsable, pese a tratarse de un indicio derivado del propio sistema de fiscalización, lo que hubiera motivado, como mínimo, una conciliación con los datos contables registrados en el propio sistema.

⁷ De conformidad con lo ordenado en la sentencia SG-RAP-228/2018 y acumulados, todo lo anterior no fue materia de modificación, por lo que queda en los términos originalmente establecidos en el acuerdo INE/CG884/2018.

En ese sentido, como lo refieren los recurrentes, existe una omisión en reportar eventos en la agenda de campaña, a la luz de las pruebas ofrecidas, por lo que la responsable estaba constreñida a verificar dicha situación, y sólo en el caso de estimarlo necesario, concatenarlo con los 'links' proporcionados.

Es decir, el sólo ofrecimiento de la prueba referida como 'lista de reportes' era punto inicial de realizar una facultad de investigación sobre el mismo para corroborarlo o demeritarlo..."

Al respecto, en acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Regional con sede en Guadalajara, esta autoridad procedió a valorar el reporte presentado por el quejoso como medio probatorio, obtenido del portal de internet del Instituto Nacional Electoral relativo a los resultados de fiscalización y rendición de cuentas, en el cual se advierte que el candidato denunciado, el C. Enrique Rojas Román, no presentó agenda de eventos de campaña.

En esa tesitura, cabe mencionar que la exhibición del reporte en mención no acredita por sí mismo la infracción que el quejoso denuncia, relativa a la omisión de reportar eventos en el módulo de agendas del Sistema Integral de Fiscalización, dado que para tal efecto es necesario demostrar que en la especie existieron eventos susceptibles de ser registrados.

Sobre el particular, la pretensión del quejoso radica en atribuir la realización de eventos por parte del denunciado, aportando como medio probatorio los links de la red social de Facebook correspondientes al perfil de un tercero y no del candidato en mención, de las cuales no es posible desprender las circunstancias de tiempo, modo y lugar a efecto de acreditar los hechos, dado el carácter imperfecto de las pruebas técnicas ofrecidas.

En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en el contenido de las imágenes, argumentado que de ellas se advierte el itinerario de los eventos de campaña del candidato; así como, los conceptos de gasto que se observan en ellas, mismas que actualizan un rebase al tope de gastos de campaña fijado por la autoridad; pues el propio denunciante vincula los links o ligas de internet (Facebook o Twitter) con conceptos de gasto que según su dicho acreditan las erogaciones y que en conjunto pretende se cuantifique al tope en comento para actualizar el rebase de topes denunciado.

En ese orden de ideas, en el expediente de mérito únicamente obran elementos probatorios adicionales respecto al evento denunciado realizado el 26 de junio de 2018, toda vez que, en el escrito de respuesta al emplazamiento realizado por esta autoridad, el otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de La Barca, Jalisco, el C. Enrique Rojas Román manifestó lo que a continuación se transcribe:

“Además, en ese mismo lugar, pero con fecha 26 de junio de 2018, participé en el evento de cierre de campaña junto con el candidato por la coalición "Juntos Haremos Historia" a Diputado Federal por el XV Distrito Electoral en el Estado de Jalisco, el señor Francisco Segoviano Trujillo, y este evento también fue monitoreado por personal del INE. Ahora bien, cabe señalar, que respecto de éstos eventos no realicé gasto alguno, sin embargo, entiendo que se deba aplicar el prorrateo correspondiente, conforme al gasto informado y acreditado por los mencionados candidatos”

En ese tenor, concatenando los elementos de prueba presentados por el quejoso y lo manifestado por el candidato en mención, es dable concluir que se encontraba obligado a informar respecto de dicho evento en el módulo de agendas del Sistema Integral de Fiscalización, situación que en la especie no aconteció.

En consecuencia, tomando en consideración los argumentos y conclusiones a las que arribo el órgano jurisdiccional, esta autoridad determina que la otrora coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, así como su entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de la Barca en el estado de Jalisco, C. Enrique Rojas Román, vulneraron lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.

No obstante, lo anterior, si bien existe una conducta infractora de la normatividad electoral que debería ser reprochada por esta autoridad administrativa, también es cierto que en el caso en concreto realizar tal reproche no resulta procedente al tenor de las consideraciones que se exponen a continuación:

1. Garantía de audiencia.

En el caso, se destaca que el presente Acuerdo se emite únicamente para acatar los efectos de la sentencia identificada con la clave alfanumérica SG-RAP-228/2018 y acumulados, por lo que si bien es cierto en el marco de la sustanciación del procedimiento que por esta vía se modifica, se dio garantía de audiencia a los sujetos incoados al emplazarlos y notificarles la etapa de alegatos, también los es que respecto a la conducta acreditada, no se dio garantía de audiencia a los sujetos denunciados por lo que hace a la conducta materia del presente apartado, en consecuencia, al realizar una afectación a la esfera jurídica de dichos sujetos atentaría con lo dispuesto a los artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior, se robustece con la Jurisprudencia 20/2013, con rubro **GARANTÍA DE AUDIENCIA. DEBE OTORGARSE POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS**, que a la letra señala:

**Margarita Padilla Camberos y otros
VS
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional**

Jurisprudencia 20/2013

GARANTÍA DE AUDIENCIA. DEBE OTORGARSE POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 14, 16, 41, Base IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23, párrafo 1, 27 y 38, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que la garantía del debido procedimiento es un derecho fundamental y que los partidos políticos, en tanto entidades de interés público, con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la Constitución federal y en las leyes reglamentarias, deben respetar los derechos fundamentales de sus militantes, para lo cual están obligados a incluir en sus Estatutos procedimientos que cumplan con las garantías procesales mínimas. En esas condiciones, la garantía de audiencia debe observarse por los partidos políticos, previo a la emisión de cualquier acto que pudiera tener el efecto de privar a sus afiliados de algún derecho político-electoral, constitucional, legal o estatutario, en la que tengan la posibilidad de ser oídos y vencidos en el procedimiento, con la oportunidad de aportar elementos de prueba para una adecuada defensa.

Quinta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. **SUP-JDC-851/2007** .—Actores: Margarita Padilla Camberos y otros.—Responsable: Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional.—1 de agosto de 2007.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretario: Héctor Rivera Estrada.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. **SUP-JDC-286/2008** .—Actor: Hipólito Rigoberto Pérez Montes.—Responsable: Comisión de Orden del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional.—23 de abril de 2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Sergio Dávila Calderón.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. **SUP-JDC-475/2008** .—Actora: Claudia Edith Neri Sánchez.—Responsable: Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Jalisco.—10 de julio de 2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Ernesto Camacho Ochoa y Erik Pérez Rivera.

Notas: Los preceptos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales interpretados en el primer precedente, son anteriores a la reforma legal publicada el 14 de enero de 2008, en el Diario Oficial de la Federación.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el catorce de agosto de dos mil trece, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 45 y 46.

Así, de la transcripción anterior, se desprende que previo a la emisión de un acto de molestia o afectación la autoridad debe hacer de su conocimiento a los involucrados a efecto de que estos tengan la posibilidad de ser oídos y vencidos en el procedimiento, con la oportunidad de aportar elementos de prueba para una adecuada defensa, lo cual en el caso en concreto no aconteció, de ahí que resulte inviable que esta autoridad administrativa imponga una sanción a los sujetos incoados.

2. Principio non reformatio in peius

Cabe mencionar que, si bien se actualiza una conducta infractora del artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, por la omisión de reportar un evento en la agenda de actos públicos de conformidad con la normatividad electoral por parte de los sujetos obligados.

No obstante lo anterior, en observancia al principio *non reformatio in peius*⁸ que se traduce en que la resolución recurrida no debe ser modificada en perjuicio del reo, esta autoridad no puede derivado de un recurso de apelación sancionar una conducta de naturaleza distinta a la originalmente sancionada en la resolución que por esta vía se acata, pues ello afectaría su esfera jurídica del sujeto obligado. Resulta aplicable al caso lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-004/2006.

Adicionalmente, a fin de tutelar el derecho de garantía de audiencia de los enjuiciantes, establecido en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable debe notificar y requerir a cada sujeto

⁸ Ello con base en la Tesis Aislada, Semanario de la Suprema Corte de Justicia, Sexta Época, Primera Sala, Segunda Parte, VI, pág. 99, de rubro: APELACION EN MATERIA PENAL (NON REFORMATIO IN PEIUS), la cual refiere que por ningún motivo la sanción podrá ser mayor a la recurrida en el medio de impugnación, conforme al principio *non reformatio in peius* (no reformar en perjuicio), en tanto que la resolución recurrida no debe ser modificada en detrimento del imputado, por lo que el nuevo fallo no debe ser más gravoso que el antiguo.

obligado para que subsane la omisión en que han incurrido, por lo que durante el procedimiento de fiscalización las notificaciones relacionadas con las observaciones de los errores y omisiones, deben realizarse a los sujetos obligados, el cual tiene la obligación de aclarar o subsanar dichas cuestiones.

Es importante señalar que de conformidad con el nuevo modelo de fiscalización así como el establecimiento de derechos y obligaciones respectivas a cada uno de los sujetos obligados, se especifica que por lo que hace a la conducta en análisis y de conformidad con los artículos 443, numeral 1, inciso c) y 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el manejo de los recursos así como su debido control es responsabilidad del partido y de los candidatos en cuestión.

Entonces, si durante el procedimiento de fiscalización o derivado del procedimiento de queja que por esta vía se acata, no fue hecha del conocimiento por parte de la autoridad fiscalizadora (falta de forma al omitir presentar las muestras correspondientes), tampoco fue posible notificar y requerir a cada sujeto obligado para que formulara las manifestaciones que a su derecho convengan, en consecuencia el sujeto obligado no tuvo oportunidad de exponer sus posiciones, argumentos y alegatos, ni de ofrecer y aportar los medios de convicción que estimara pertinentes para su defensa.

En este sentido sería violatorio sancionar a la otrora Coalición “Juntos Haremos Historia” por la irregularidad ahora detectada, por lo que a fin de respetar las formalidades que rigen el debido proceso y, por ende, la garantía de audiencia del apelante, pese a que la omisión versa en adjuntar la totalidad de la documentación comprobatoria de gastos, en atención al principio *non reformatio in peius* esta autoridad determina que en el caso concreto lo procedente es que **la observación quede sin efectos.**

(...)⁹

6. Que en términos de lo ordenado por la H. Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación SG-RAP-228/2018 y acumulados se procede a modificar el Dictamen Consolidado correspondiente al Informe de ingresos y gastos de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco, identificado con la clave INE/CG1125/2018, así como la Resolución INE/CG1127/2018, atendiendo a las siguientes consideraciones:

⁹ De conformidad con lo ordenado en la sentencia SG-RAP-228/2018 y acumulados, todo lo anterior no fue materia de modificación, por lo que queda en los términos originalmente establecidos en el acuerdo INE/CG884/2018.

El ciudadano Enrique Rojas Román, candidato electo a Presidente Municipal de La Barca, Jalisco, postulado por la otrora coalición “Juntos Haremos Historia”, interpuso recurso de apelación para controvertir los acuerdos INE/CG1125/2018 e INE/CG1127/2018, ante la Sala Regional Guadalajara, en donde fue radicado con el número de expediente **SG-RAP-255/2018**.

Posteriormente, la citada autoridad jurisdiccional declaró el cierre de instrucción del asunto, formulándose el Proyecto de Resolución respectivo, y propuso la acumulación de dicho expediente al diverso **SG-RAP-228/2018**.

Ahora bien, al resolver el recurso de apelación mencionado en el párrafo que antecede, la citada autoridad jurisdiccional, en el apartado 13 “Efectos” de la citada ejecutoria, determinó lo siguiente:

“B) En el caso de cuantificarse algún monto o acreditarse alguna conducta infractora que incida en los acuerdos INE/CG1125/2018 e INE/CG1127/2018 (Informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de gobernador, diputados locales y ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017- 2018, en el Estado de Jalisco [partidos políticos y coaliciones]), o desestimarse la situación de prorrateo, dentro del mismo lapso indicado en el inciso A), así como en la sesión de resolución del procedimiento sancionador en materia de fiscalización, emitirá una nueva resolución en la cual:

- Se especifique las conclusiones (del Dictamen y/o resolución) que fueron objeto de modificación o revocación con motivo de los efectos de la nueva resolución del procedimiento de queja INE/Q-COFUTF/630/2018.*
- Se cuantifique el monto de tope de gastos de campaña del candidato denunciado y si fue rebasado o no.*
- Se individualice la sanción a los partidos involucrados y a los sujetos infractores, en su caso.*
- Las demás modificaciones que procedan conforme a los efectos del procedimiento sancionador en materia de fiscalización.*
- En caso de desestimarse el prorrateo, especifique los conceptos sancionados o infracciones relacionadas de dicha situación, y las razones por las cuales no procedió el reclamo.”*

Sobre el particular, se informa que derivado del procedimiento de queja identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/630/2018, no se actualizó modificación alguna al Dictamen Consolidado y resolución respectiva, de la revisión a los Informes de Campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos

de gobernador, diputados locales y ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017- 2018, en el estado de Jalisco.

No obstante, es importante destacar que del recurso de apelación identificado con el número de expediente SG-RAP-255/2018, que fue acumulado para su resolución en la ejecutoria SG-RAP-288/2018, se desprenden consideraciones referentes al prorrateo de eventos de campaña que fueron observados en el Dictamen Consolidado referido y sancionados en la resolución atinente y, por lo tanto, derivan en modificaciones a las cifras y sanciones primigenias.

En tal virtud, en el **Anexo Único** del presente Acuerdo se desarrollan las modificaciones al Dictamen Consolidado de la revisión a los Informes de Campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de gobernador, diputados locales y ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017- 2018, en el estado de Jalisco, identificado como INE/CG1125/2018, así como a las sanciones impuestas en la Resolución INE/CG1127/2018.

Para mayor claridad, respecto a las cifras finales que involucran los egresos relacionados con la candidatura del C. Enrique Rojas Román, al cargo de Presidente Municipal de la Barca, Jalisco, por la Coalición Juntos Haremos Historia, a continuación, se plasman las cifras atinentes:

CARGO	SUJETO OBLIGADO	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	TOTAL DE GASTOS ACUMULADOS	DIFERENCIA DE PRORRATEO	TOTAL DE GASTOS NO REPORTADOS (ANEXO II A)	AJUSTES DETERMINADOS UTF (AUMENTO / DISMINUCIÓN)	ACATAMIENTO O SG-RAP-228/2018 Y ACUMULADO S SG-RAP-233/2018, SG-RAP-255/2018 Y SG-RAP-260/2018 (PRORRATEO VISITAS DE VERIFICACIÓN)	TOTAL DE GASTOS DETERMINADOS POR AUDITORÍA	TOTAL DE GASTOS	TOPE DE GASTOS	DIFERENCIA A TOPE-GASTO	% GASTOS - TOPE
PRESIDENTE MUNICIPAL	JUNTOS HAREMOS HISTORIA (JALISCO)	ENRIQUE	ROJAS	ROMAN	\$12,482.68	\$ -	\$ 74,275.23	\$ -	\$8,169.77	\$82,445.00	\$ 94,927.68	\$ 260,542.80	\$ 165,615.12	36.43%

Bajo esta tesitura, , esta autoridad electoral tiene certeza de que **no se actualizó el rebase al tope de gastos de campaña** en la candidatura del C. Enrique Rojas Román, al cargo de Presidente Municipal de la Barca, Jalisco, pues se ejercieron \$94,927.68 (noventa y cuatro mil novecientos veintisiete pesos 68/100 M.N.), de los \$260,542.80 (doscientos sesenta mil quinientos cuarenta y dos pesos 80/100 M.N.) aprobados como límite de gasto, por lo que no se vulneró lo establecido en los artículos 431, numerales 1, en relación con el artículo 443, numeral 1, inciso f); 445 numeral 1 incisos e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 223, numerales 6 e) del Reglamento de Fiscalización.

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y aa); y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

A C U E R D A

PRIMERO. Se **modifica** lo conducente en la Resolución **INE/CG884/2018**, aprobada en sesión extraordinaria, celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, respecto del procedimiento de fiscalización instaurado en contra de la otrora Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social y los CC. Andrés Manuel López Obrador, Francisco Segoviano Trujillo, Carlos Lomelí Bolaños, Imelda Serratos Madrigal y Enrique Rojas Román, candidatos a los cargos de Presidente de la República, Diputado Federal por el Distrito 15, Gobernador del estado de Jalisco, Diputada Local por el Distrito 15 y Presidente Municipal de La Barca, en dicha entidad, respectivamente, identificado como **INE/Q-COF-UTF/630/2018**, en los términos precisado en el Considerando **5** del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se **modifican** las cifras finales de los gastos determinados en los Dictámenes Consolidados correspondientes a los Informes de ingresos y gastos de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco, identificado con la clave INE/CG1125/2018, así como la Resolución INE/CG1127/2018 en los términos precisados en el **Anexo Único** señalado en el Considerando **6** del presente Acuerdo, en consecuencia, el otrora candidato a Presidente Municipal de La Barca, Jalisco, postulado por la entonces coalición “Juntos Haremos Historia”, el C. Enrique Rojas Román, no rebasó el tope de gastos de campaña y, por lo tanto, quedó sin efectos la conclusión **11_C73_P3**.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que informe a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SM-RAP-228/2018 y acumulados**, remitiéndole para ello copia certificada de este Acuerdo.

CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

ANEXO ÚNICO

ACATAMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SG-RAP-228/2018 Y ACUMULADOS.

En términos de lo ordenado por la H. Sala Regional Guadalajara al resolver el recurso de apelación SG-RAP-228/2018 y acumulados y de conformidad con lo expuesto en el **Considerando 6** del presente Acatamiento, se procede a modificar el Dictamen Consolidado correspondiente al Informe de ingresos y gastos de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco, identificado con la clave INE/CG1125/2018, así como la Resolución respectiva identificada como INE/CG1127/2018, para quedar como se describe a continuación:

DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE CAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES A LOS CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017 – 2018 EN EL ESTADO DE JALISCO. (PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES)

“(…)
11.4 Coalición “Juntos Haremos Historia”
(…)”

ID.	Observación Oficio: INE/UTF/DA/37656/18 10 de julio de 2018	Respuesta Oficio:	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió																		
138	INE/Q-COF- UTF/630/2018/JAL		<p>Procedimiento de quejas</p> <p>Del análisis a la información contenida en la queja núm. INE/Q-COF-UTF/630/2018, se determinó que el candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia, en el estado de Jalisco, el C. Enrique Rojas Román, por el municipio de "La Barca", omitió reportar diversos gastos por un importe de \$66,272.96.</p> <p>Por lo antes expuesto, al acumular el monto no reportado a los informes de campaña, se observó que, el sujeto obligado no excedió el tope de gastos de campaña establecido mediante acuerdo IEPC-ACG-156/2017, por el Instituto Estatal y de Participación Ciudadana de Jalisco, para la elección al cargo de Presidente Municipal del Municipio de la Barca, como se muestra en el cuadro:</p> <table><tr><th>Candidato</th><th>Gastos (a)</th><th>Gastos no reportados determinados por auditoría</th><th>Reportados Queja INE/Q-COF-UTF/630/2018</th><th>Total Gastos no reportados (b)</th><th>Total Gastos (c)=(a)+(b)</th><th>Tope de Campaña</th><th>Dif. Gastos Vs Tope de Gastos</th><th>%</th></tr><tr><td>Enrique Rojas Román</td><td>12,482.68</td><td>\$14,172.04</td><td>68,272.96</td><td>82,445.00</td><td>94,927.68</td><td>260,542.80</td><td>\$165,615.12</td><td>36.43%</td></tr></table>	Candidato	Gastos (a)	Gastos no reportados determinados por auditoría	Reportados Queja INE/Q-COF-UTF/630/2018	Total Gastos no reportados (b)	Total Gastos (c)=(a)+(b)	Tope de Campaña	Dif. Gastos Vs Tope de Gastos	%	Enrique Rojas Román	12,482.68	\$14,172.04	68,272.96	82,445.00	94,927.68	260,542.80	\$165,615.12	36.43%	11_C73_P3 SIN EFECTO		
Candidato	Gastos (a)	Gastos no reportados determinados por auditoría	Reportados Queja INE/Q-COF-UTF/630/2018	Total Gastos no reportados (b)	Total Gastos (c)=(a)+(b)	Tope de Campaña	Dif. Gastos Vs Tope de Gastos	%																
Enrique Rojas Román	12,482.68	\$14,172.04	68,272.96	82,445.00	94,927.68	260,542.80	\$165,615.12	36.43%																

ANEXO ÚNICO

(...)

Se adiciona al Anexo II-A del Dictamen el cálculo del prorrato del gasto originalmente acumulado al otrora candidato el C. Enrique Rojas Román, como a continuación se detalla:

Diputado		Candidato												
Monio a prorrato		Federal 50%	Local 50%											
189,705.00		\$94,852.50	\$94,852.50											
PROCESO	AMBITO	PROCESO ELECTORAL	ESTADO ELECCION	SUBNIVEL ENTIDAD	ID CONTABILIDAD	CARGO	SUJETO OBLIGADO	SIGLAS	TIPO ASOCIACION	NOMBRE CANDIDATO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	TOPE DE GASTOS	Importe derivado del Prorrato
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-JAL-01 JUL 2018	JALISCO	Distrito 15-LA BARCA	47256	DIPUTADO LOCAL MR	JUNTOS HAREMOS HISTORIA (JALISCO)	MORENA-PT- ENCUENTRO SOCIAL	COA	IMELDA	SERRATOS	MADRIGAL	\$ 1,429,417.17	\$ 44,821.87
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-JAL-01 JUL 2018	JALISCO	Municipio 123- ZAPOTLAN DEL REY	50306	PRESIDENTE MUNICIPAL	JUNTOS HAREMOS HISTORIA (JALISCO)	MORENA-PT- ENCUENTRO SOCIAL	COA	JOSE DE JESUS	AGUILAR	GARCIA	\$ 75,490.00	\$ 2,367.12
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-JAL-01 JUL 2018	JALISCO	Municipio 16- AYOTLAN	50351	PRESIDENTE MUNICIPAL	JUNTOS HAREMOS HISTORIA (JALISCO)	MORENA-PT- ENCUENTRO SOCIAL	COA	GABRIEL	VASQUEZ	ANDRADE	\$ 138,785.68	\$ 4,351.87
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-JAL-01 JUL 2018	JALISCO	Municipio 23- ZAPOTLAN EL GRANDE	50366	PRESIDENTE MUNICIPAL	JUNTOS HAREMOS HISTORIA (JALISCO)	MORENA-PT- ENCUENTRO SOCIAL	COA	ALEJANDRO	BARRAGAN	SANCHEZ	\$ 403,566.36	\$ 12,654.53
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-JAL-01 JUL 2018	JALISCO	Municipio 18-LA BARCA	50378	PRESIDENTE MUNICIPAL	JUNTOS HAREMOS HISTORIA (JALISCO)	MORENA-PT- ENCUENTRO SOCIAL	COA	ENRIQUE	ROJAS	ROMAN	\$ 260,542.80	\$ 8,169.77
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-JAL-01 JUL 2018	JALISCO	Municipio 65- OCOTLAN	50389	PRESIDENTE MUNICIPAL	JUNTOS HAREMOS HISTORIA (JALISCO)	MORENA-PT- ENCUENTRO SOCIAL	COA	MARIA FERNANDA	GARCIA	HERNANDEZ	\$ 363,696.60	\$ 11,404.34
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-JAL-01 JUL 2018	JALISCO	Municipio 49- JAMAY	59177	PRESIDENTE MUNICIPAL	JUNTOS HAREMOS HISTORIA (JALISCO)	MORENA-PT- ENCUENTRO SOCIAL	COA	LLIA VERONICA	GOMEZ	GONZALEZ	\$ 90,237.90	\$ 2,829.57
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-JAL-01 JUL 2018	JALISCO	Municipio 68- PONCITLAN	59179	PRESIDENTE MUNICIPAL	JUNTOS HAREMOS HISTORIA (JALISCO)	MORENA-PT- ENCUENTRO SOCIAL	COA	VERONICA	LOMELI	RODRIGUEZ	\$ 174,952.12	\$ 5,485.93
CAMPAÑA	LOCAL	PEL-JAL-01 JUL 2018	JALISCO	Municipio 34- AYOTLAN	60318	PRESIDENTE MUNICIPAL	HISTORIA (JALISCO)	MORENA-PT- ENCUENTRO SOCIAL	COA	INDIRA	TORRES	GILES	\$ 88,258.62	\$ 2,767.50
CAMPAÑA	LOCAL			DEGOLLADO									\$ 94,852.50	

(...)

Se modifica el Anexo II-A del Dictamen Consolidado en la parte conducente como a continuación se detalla:

ESTADO ELECCION	SUBNIVEL ENTIDAD	ID CONTABILIDAD	CARGO	NOMBRE CANDIDATO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	OPERATIVOS DE LA CAMPAÑA	QUEJAS	Jornada Electoral	TOTAL DE GASTOS NO REPORTADOS
JALISCO	15-LA BARCA	47256	DIPUTADO LOCAL MR	IMELDA	SERRATOS	MADRIGAL	\$12,000.00	\$	\$169.56	\$12,169.56
JALISCO	ZAPOTLAN DEL REY	50306	PRESIDENTE MUNICIPAL	JOSE DE JESUS	AGUILAR	GARCIA	\$6,000.00	\$	\$	\$6,000.00
JALISCO	AYOTLAN	50351	PRESIDENTE MUNICIPAL	GABRIEL	VASQUEZ	ANDRADE	\$7,133.70	\$128,180.00	\$1.21	\$135,314.91
JALISCO	ZAPOTLAN EL GRANDE	50366	PRESIDENTE MUNICIPAL	ALEJANDRO	BARRAGAN	SANCHEZ	\$84,354.50	\$	\$18.03	\$84,372.53
JALISCO	LA BARCA	50378	PRESIDENTE MUNICIPAL	ENRIQUE	ROJAS	ROMAN	\$6,000.00	\$68,272.96	\$2.27	\$74,275.23
JALISCO	OCOTLAN	50389	PRESIDENTE MUNICIPAL	ENRIQUE	GARCIA	HERNANDEZ	\$6,000.00	\$	\$10.73	\$6,010.73
JALISCO	JAMAY	59177	PRESIDENTE MUNICIPAL	MARIA FERNANDA	GOMEZ	GONZALEZ	\$6,000.00	\$	\$1.26	\$6,001.26
JALISCO	PONCITLAN	59179	PRESIDENTE MUNICIPAL	LILIA VERONICA	LOMELI	RODRIGUEZ	\$6,000.00	\$	\$7.94	\$6,007.94
JALISCO	DEGOLLADO	60318	PRESIDENTE MUNICIPAL	INDIRA	TORRES	GILES	\$6,000.00	\$	\$	\$6,000.00

ANEXO ÚNICO

(...)

Se modifica el Anexo II del Dictamen Consolidado en la parte conducente como a continuación se detalla:

CARGO	SUJETO OBLIGADO	NOMBRE CANDIDATO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	TOTAL DE GASTOS ACUMULADOS	DIFERENCIA DE PRORRATEO	TOTAL DE GASTOS NO DETERMINADOS (ANEXO II A)	AJUSTES DETERMINADOS (AUMENTO O DISMINUCIÓN)	ACATAMIENTO SG-RAP-238/2018 Y ACUMULADOS SG-RAP-233/2018, SG-RAP-255/2018 Y SG-RAP-280/2018 (PRORRATEO Y VERIFICACIÓN)	TOTAL DE GASTOS DETERMINADOS POR AUDITORIA	TOTAL DE GASTOS	TOPE DE GASTOS	DIFERENCIA TOPE-GASTO	% GASTOS -TOPE
DIPUTADO LOCAL MR	JUNTOS HAREMOS HISTORIA (JALISCO)	IMELDA	SERRATOS	MADRIGAL	\$ 87,575.84	\$ -	\$ 12,189.56	\$ -	\$44,821.87	\$56,991.43	\$124,567.27	\$ 142,417.17	\$ 1,304,849.90	8.71%
PRESIDENTE MUNICIPAL	JUNTOS HAREMOS HISTORIA (JALISCO)	JOSE DE JESUS	AGUILAR	GARCIA	\$875.68	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$2,367.12	\$8,367.12	\$ 9,424.80	\$ 75,490.00	\$ 66,247.20	12.24%
PRESIDENTE MUNICIPAL	JUNTOS HAREMOS HISTORIA (JALISCO)	GABRIEL	VASQUEZ	ANDRADE	\$51,888.49	\$ -	\$ 135,314.91	\$ -	\$4,351.87	\$139,668.78	\$191,556.27	\$ 138,785.68	\$ 52,769.59	138.02%
PRESIDENTE MUNICIPAL	JUNTOS HAREMOS HISTORIA (JALISCO)	ALEJANDRO	BARRAGAN	SANCHEZ	\$4,884.72	\$ -	\$ 84,372.53	\$ -	\$12,654.53	\$97,027.06	\$101,911.78	\$ 403,566.36	\$ 301,654.58	25.25%
PRESIDENTE MUNICIPAL	JUNTOS HAREMOS HISTORIA (JALISCO)	ENRIQUE	ROJAS	ROMAN	\$12,482.68	\$ -	\$ 74,275.23	\$ -	\$8,168.77	\$82,445.00	\$ 94,927.68	\$ 260,542.80	\$ 165,615.12	36.43%
PRESIDENTE MUNICIPAL	JUNTOS HAREMOS HISTORIA (JALISCO)	ENRIQUE	GARCIA	HERNANDEZ	\$4,147.01	\$ -	\$ 6,010.73	\$ -	\$11,404.34	\$17,415.07	\$ 21,562.08	\$ 363,686.80	\$ 342,134.52	5.93%
PRESIDENTE MUNICIPAL	JUNTOS HAREMOS HISTORIA (JALISCO)	FERNANDA	GOMEZ	GONZALEZ	\$1,047.76	\$ -	\$ 6,001.26	\$ -	\$2,828.57	\$8,830.83	\$ 9,878.59	\$ 90,237.90	\$ 80,359.31	10.95%
PRESIDENTE MUNICIPAL	JUNTOS HAREMOS HISTORIA (JALISCO)	LILIA VERONICA	LOMELI	RODRIGUEZ	\$2,059.92	\$ -	\$ 6,007.94	\$ -	\$5,485.93	\$11,493.87	\$13,553.79	\$ 174,952.12	\$ 161,398.33	7.75%
PRESIDENTE MUNICIPAL	JUNTOS HAREMOS HISTORIA (JALISCO)	INDIRA	TORRES	GILES	\$2,814.36	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$2,767.50	\$8,767.50	\$11,591.86	\$ 88,258.62	\$ 76,676.76	13.12%

ANEXO ÚNICO

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE CAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, EN EL ESTADO DE JALISCO (PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES).

VISTO el Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización al Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los Candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Jalisco.

“(…)

33.11 Coalición “Juntos Haremos Historia”

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del Informe de la campaña en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado son las siguientes:

(…)

l) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones ... y C73_P3¹

(…)

R E S U E L V E

(…)

DÉCIMO PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando **33.11** de la presente Resolución, se imponen a la **Coalición “Juntos Haremos Historia”**, las sanciones siguientes:

(…)

l) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: ... y C73_P3.

Queda sin efectos

(…)”

¹ Esta conclusión en acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SG-RAP-228/2018 y Acumulados, quedó sin efectos en el Dictamen Consolidado, por lo tanto, el otrora candidato postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia” el C. Enrique Rojas Román no rebasó el tope de gastos de campaña, razón por la cual no procede sanción alguna.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Pasamos ahora al apartado 9.22. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. _____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:

Muchas gracias, Consejero Presidente. _____

Este asunto tiene que ver con un acatamiento respecto de gastos de la precampaña presidencial del candidato José Antonio Meade. _____

En este Proyecto de Acuerdo cuando originalmente conoció este Consejo General advertimos que se habían anunciado un conjunto de videos de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en la que había publicitado a favor del entonces precandidato José Antonio Meade, en un periodo estaba la difusión y era una difusión pagada por lo que lo que se decidió fue sancionar el pago de la publicidad durante el periodo de las Precampañas en los términos que nos había informado, me parece que era Facebook, la red social. _____

El Tribunal Electoral conoce y lo que nos orden es que no sólo tomemos en cuenta la publicidad pagada en las redes sociales, sino que si hay un video hay un costo de producción asociado a este video y lo que nos ordena es que lo contabilicemos como un gasto “no reportado” y, hasta este punto estaría de acuerdo con el sentido del Proyecto de Acuerdo, porque acatando en sus términos lo que nos ordena la Sala Superior, lo que se hace es contabilizarlo como un gasto, ¿cuál es el problema? Que en el Proyecto de Acuerdo lo que se señala es que se utiliza una matriz de precios para videos en Internet, una matriz de precios que solamente tiene un precio del candidato a Senador por Yucatán o el precandidato de Senador por Yucatán y no tiene ningún otro precio que pueda integrar la matriz de precios, bueno, me parece que eso es absolutamente inaceptable, no es una cuestión nada más del conocimiento que puede tener esta autoridad, cuando fiscalizamos las Precampañas Presidenciales advertimos que todos los candidatos, todos, tanto el candidato Ricardo Anaya, como el candidato Andrés Manuel López Obrador, como el candidato José Antonio Meade, todos tuvieron cantidad de videos alojados en Internet, se denunciaron cantidad y se reportaron cantidad de videos alojados en Internet, me parece increíble que no podamos construir una matriz de precios si hubo esa cantidad de videos empleados durante las precampañas, incluso en el periodo de obtención de apoyo ciudadano, tuvimos a los 2 candidatos independientes presidenciales con cantidad de videos alojados en Internet y sin embargo, se señala que hay un solo video y es el único que puede formar parte de esta

matriz de precios y ni siquiera es de uno de los candidatos de estas elecciones cuando se analizaron, es de un candidato a Senador por el estado de Yucatán._____

Me parece que eso no es atender en sus términos, porque es establecer un costo que no es acorde a lo que establece el Reglamento de Fiscalización, esto hace muy evidente que no se está construyendo una matriz de precios con todos los costos que están siendo reportados, porque si el problema es cómo se denomina el concepto por parte del partido político, me parece que entonces lo que estamos teniendo es una posibilidad enorme de elusión de las reglas de fiscalización, porque nada más es, no mencionar la palabra video o redes sociales en el concepto que llena el partido político para que ese no sea tomado en consideración, porque si no resulta absolutamente inverosímil, que no existan más videos que puedan ser tomados en cuenta para esa contabilización._____

No acompañaría que eso es una forma de atender lo que la Sala Superior nos está ordenando._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín._____

Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación correspondiente._

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 9.22._____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo._____

7 votos._____

¿En contra?_____

2 votos._____

Aprobado por 7 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, no estando presentes durante la votación los Consejeros Electorales, Doctor Benito Nacif Hernández y Maestra Dania Paola Ravel Cuevas), Consejero Presidente._____

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG1296/2018) Ptos. 9.22_____

INE/CG1296/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-77/2018

A N T E C E D E N T E S

I. Escrito de queja. El treinta de enero de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización, escrito de queja de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciocho, suscrito por la Lic. Joanna Alejandra Felipe Torres, Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra del Partido Revolucionario Institucional; a su precandidato a Presidente de la República, el C. José Antonio Meade Kuribreña; y a la Confederación Nacional de Campesinos, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen y aplicación de los recursos, por lo tanto el primero de febrero de la presente anualidad se acordó admitir a trámite y sustanciación el escrito de queja para formar el expediente **INE/Q-COF-UTF/11/2018**.

II. Aprobación de Resolución. El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria la Resolución identificada con el número **INE/CG184/2018**, que presentó la Comisión de Fiscalización del propio Instituto, sobre el procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Revolucionario Institucional, y su precandidato a Presidente de la República, el C. José Antonio Meade Kuribreña, identificado como **INE/Q-COF-UTF/11/2018**.

III. Recurso de Apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el treinta de marzo de dos mil dieciocho, el Partido Acción Nacional interpuso recurso de apelación para controvertir la parte conducente de la Resolución **INE/CG184/2018**, el cual quedó radicado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el expediente identificado con la clave alfanumérica **SUP-RAP-77/2018**.

IV. Sentencia Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior, resolvió el recurso referido en sesión pública celebrada el diez de mayo de dos mil dieciocho, determinando en el Punto Resolutivo único, lo que se transcribe a continuación:

*“ÚNICO. Se **revoca** para los efectos precisados en el Considerando Séptimo.”*

Lo anterior, con la finalidad de que este Consejo General se pronuncie sobre si hubo o no un gasto de producción respecto de los videos objeto de denuncia acorde con los planteamientos hechos por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

V. Derivado de lo anterior, el recurso de apelación SUP-RAP-77/2018 tuvo por efecto **revocar parcialmente la Resolución INE/CG184/2018**, para los efectos ordenados por la Sala Superior por lo que se procede a la modificación de dicho documento. Lo anterior, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos c), d) y g) de la de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables, en consecuencia, la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de mérito.

C O N S I D E R A N D O

1. Competencia. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44 numeral 1, incisos j) y aa); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización.

2. Determinación del órgano jurisdiccional. Que el diez de mayo de dos mil dieciocho, la Sala Superior resolvió revocar la Resolución identificada con el número de **INE/CG184/2018**, dictada por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para determinar lo que proceda respecto a los gastos de producción de videos, acorde con los planteamientos hechos por la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos, por lo que se procede a la modificación de dicho documento para los efectos precisados en el presente Acuerdo.

3. Alcances del cumplimiento. Que por lo anterior y en razón al **estudio de fondo y efectos** de la sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-77/2018 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó lo que se transcribe a continuación:

“(…)

SEXTO. Estudio de fondo.

(…)

Agravio 2. Falta de exhaustividad por no haber considerado los gastos de producción del video de un tercero.

Síntesis

Aduce que tal y como se desprende de los apartados B, C y D, la responsable dejó de considerar la valoración remitida por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos en cuanto a la producción y postproducción de los videos, ya que el monto de lo beneficiado no solo consistió en el importe pagado por publicidad en Facebook, sino también la elaboración y edición, y que por tanto, lo correcto es que la autoridad determine de acuerdo a la matriz de precios los costos y los acumule al tope de gastos.

Respuesta.

*Se estima **PARCIALMENTE FUNDADO** este reproche, pues como acertadamente lo refiere el quejoso, la responsable al momento de individualizar la sanción es omisa en ponderar si la producción o post-producción generó algún costo adicional.*

En efecto, a páginas que van cincuenta y tres a noventa (53-90) se realizó un estudio sobre la vinculación de los videos con la agrupación y la persona que erogó los costos, en este sentido, la autoridad determinó que por lo que hace al nombrado como “Juntos vamos a ganar José Antonio Meade” y “Servir a México y Trabajar por él” fueron saldadas por un tercero, refiriendo la data correspondiente al pago, prueba de que fue valorada en términos de los artículos 16.2 y 21.3 del reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

Por su parte, también se requirió a Facebook Ireland y al Benjamín Obeso Fernández para obtener más información de la publicidad contratada, en este sentido la plataforma respondió:

ID	Descripción	Respuesta Facebook
1	Anuncio de publicidad de un video que se titula “¡Juntos vamos a ganar José Antonio Meade”, mismo que corresponde a un evento del PRI en el que aparece el precandidato ofreciendo un discurso. Enlace: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1612173755492692&id=129365273773555	La URL está asociada a campaña publicitaria. Monto gastado \$3,647.47 (Tres mil seiscientos cuarenta y siete pesos 47/100 Moneda Nacional). Rango de tiempo activo de las campañas publicitarias: La campaña publicitaria estuvo activa del 4 de diciembre de 2017, hasta el 14 de diciembre de 2017. Método de pago: Múltiple: Tarjeta Master Card con terminación 9166 por un lado, y método Pay Pal con la cuenta obeso.fdz@gmail.com

ID	Descripción	Respuesta Facebook
2	Anuncio de publicidad de un video titulado “Servir a México y trabajar por él #Meade2018” Enlace: https://www.facebook.com/cen.cnc/videos/vb.129365273773555/1611708152205919/?type=2&theater	La URL está asociada a campaña publicitaria. Monto gastado \$1,883.95 (Mil ochocientos ochenta y tres pesos 95/100 Moneda Nacional). Rango de tiempo activo de las campañas publicitarias: activa del 4 de diciembre de 2017, hasta el 14 de diciembre de 2017. Método de pago: Múltiple: Tarjeta Master Card con terminación 9166 por un lado, y método Pay Pal con la cuenta obeso.fdz@gmail.com

Así, el ciudadano observó:

ID	Descripción	Respuesta C. Benjamín Obeso Fernández
1	Anuncio de publicidad de un video que se titula “¡Juntos vamos a ganar José Antonio Meade”, mismo que corresponde a un evento del PRI en el que aparece el precandidato ofreciendo un discurso. Enlace: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1612173755492692&id=129365273773555	Por lo que respecta al video (...) el costo de la publicación fue por la cantidad de \$3,647.47 (tres mil seiscientos cuarenta y siete pesos 47/100 M.N.). El pago de la publicación de ambos links, fue realizado con la tarjeta de crédito número xxxxxxxxxxxx9166. Fue pagada con recursos propios. La producción de dichos videos no tuvo costo alguno; ya que solamente se trata de una producción artesanal.

ID	Descripción	Respuesta C. Benjamín Obeso Fernández
2	<p>Anuncio de publicidad de un video titulado "Servir a México y trabajar por él #Meade2018"</p> <p>Enlace: https://www.facebook.com/cen.cnc/videos/vb.129365273773555/1611708152205919/?type=2&theater</p>	<p>Por lo que respecta al video (...) el costo de la publicación fue por la cantidad de \$1,883.95 (Mil ochocientos ochenta y tres pesos 95/100 Moneda Nacional).</p> <p>El pago de la publicación de ambos links, fue realizado con la tarjeta de crédito número xxxxxxxxxxxx9166.</p> <p>Fue pagada con recursos propios.</p> <p>La producción de dichos videos no tuvo costo alguno; ya que solamente se trata de una producción artesanal.</p>

Es decir, tanto la empresa en línea como el requerido, fueron congruentes en cuanto a quien solicitó el servicio y costo de ellos.

Luego, se pidió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos información sobre si los videos habían sido pautados y en caso negativo se efectuará un análisis de producción de estos.

Acorde con lo pretendido, la Dirección Ejecutiva, **advirtió que los materiales no fueron pautados**, y realizó un estudio de los elementos de producción y postproducción con las siguientes características.

producción identificados, de lo que se desprende que dicho material cuenta con los elementos siguientes:

Video 1: "Juntos vamos a ganar José Antonio Meade" Duración: 01: 04 min.	
Calidad de video para transmisión Broadcast	No
Producción	Sí
Imagen	Sí
Audio	Sí
Gráficos	Sí
Post-producción	Sí
Creatividad	Sí

Video 2: "Servir a México y trabajar por él" Duración: 01: 15 min.	
Calidad de video para transmisión Broadcast	Sí
Producción	Sí
Imagen	Sí
Audio	Sí
Gráficos	Sí
Post-producción	Sí
Creatividad	Sí

Bajo esta tesitura, la responsable dedujo que existía convergencia respecto al monto pagado y la modalidad en que se hizo, difundándose estos al menos el día 14 de diciembre, es decir ya en las precampañas, por lo que valoró los materiales ciñéndolos a las limitaciones de esta etapa (páginas 74-78).

Seguidamente, concluyó que el PRI y su entonces precandidato negaron haber contratado el material publicitario, que la CNC lo subió a Facebook con el esquema de publicidad, que fue pagada por Benjamín Obeso Fernández con recursos propios y que erogó \$3,647.47 y \$1,883.95 pesos respectivamente por estos conceptos y que aparecieron entre el 3 y el 14 de diciembre.

Con lo anterior, afirmó que existió un servicio pagado para beneficiar a la precampaña de José Antonio Meade Kuribreña durante un día (14 de diciembre).

Consecuentemente, al momento de determinar el monto del beneficio realizó un cuadro para calcularlo según se expone:

ID	Video y URL	Periodo de difusión (A)	Costo total por la difusión (B)	Costo por día (B/A)	Monto total del beneficio obtenido en esta queja
1	Anuncio de publicidad de un video que se titula "Juntos vamos a ganar José Antonio Meade", mismo que corresponde a un evento del PRI en el que aparece el precandidato ofreciendo un discurso. Enlace: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1612173755492692&id=129365273773555	11 días 4 de diciembre de 2017, hasta el 14 de diciembre de 2017	\$3,647.47	\$331.58	\$488.57
2	Anuncio de publicidad de un video titulado "Servir a México y trabajar por él #Meade2018" Enlace: https://www.facebook.com/cnc.confederacion.nacional.campesina/posts/1611712008872200	12 días 3 de diciembre de 2017, hasta el 14 de diciembre de 2017	\$1,883.95	\$156.99	

Hecho esto, en el apartado D, determinó la responsabilidad de los sujetos incoados, sostuvo que la obligación de rendir y subir los gastos originaria del partido, sin embargo, existe solidaridad por parte del candidato, de ahí la existencia de la falta.

En tal contexto, una vez que la autoridad arribó a estas conclusiones, se puede advertir, que no fue exhaustiva respecto al gasto de producción y post-producción, lo anterior ya que se advierte que no se pronunció sobre si con la producción o post-producción detectada hubo algún costo adicional pese al informe rendido por la DEPPP.

Es decir, si dentro del proceso indagatorio y de evaluación efectuado por la citada, se puede considerar el costo de la publicidad, pero se deja de lado el valor neto de la creación de los videos al no contemplarse, entonces, se hace patente que la estimación efectuada debe pronunciarse si hay o no un gasto de ese tipo.

Se puede afirmar esto, ya que el proceso de fiscalización realizado tiene el cometido de determinar el origen, monto y destino de los recursos que sean utilizados por los partidos políticos, así como el deber de reportarlos en los apartados correspondientes, situación que en caso no sucedió, al no haber pronunciamiento alguno sobre el tema de la producción o post-producción.

Además, no debe dejarse de lado el hecho de que la unidad fiscalizadora tiene el deber de definir o cuantificar el monto del beneficio obtenido por el acto, situación que la obliga a considerar todos los elementos involucrados en la creación del video y su impacto en el Proceso Electoral, así como al valor estimativo que objetivamente se pueda dar con el informe técnico y a la matriz de costos que tiene, lo que solo puede configurarse cuando exista pronunciamiento sobre el particular (evaluar costos de producción y post-producción).

Lo anterior, si se toma en cuenta que de constancias no se acreditó la creación de forma artesanal, de ahí que lo congruente sea partir de estos hechos para analizar cualquier elemento que hubiera engrosado el costo del video y con ello definir al precio más próximo a su elaboración.

En conclusión, se hizo patente que la estimación efectuada no observó –al menos- los costos de producción y postproducción, cuestión que debe cuantificarse, de ahí que ahora lo correcto sea revocar estas consideraciones

en particular, para que la responsable evalúe nuevamente los elementos rendidos en el informe técnico.

(...)

SEPTIMO. Efectos.

*En las relatadas condiciones lo procedente es **REVOCAR parcialmente** la resolución a efecto de que la responsable se pronuncie sobre si hubo o no un gasto de producción acorde con los planteamientos hechos por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.*

(...)”

4. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso del recurso de apelación identificado como **SUP-RAP-77/2018**.

Por lo que, conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicte la Sala Superior del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, este Consejo General procede a modificar la Resolución INE/CG184/2018, en los términos siguientes:

- La Sala Superior, dejó intocadas todas las consideraciones que sustentan la Resolución INE/CG184/2018 recaída al procedimiento administrativo sancionador de queja con el número de expediente **INE/Q-COF-UTF/11/2018**;
- Este Consejo General se abocará únicamente al análisis de la parte conducente de los **conceptos de gastos** consistentes en la producción de los videos que fueron pautados en la red social Facebook de conformidad con el análisis realizado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas de los Partidos Políticos, información que forma parte de las constancias que integran el procedimiento referido, para en su caso determinar lo relativo a los recursos utilizados;

- Se destaca que como parte de la investigación primigenia la autoridad fiscalizadora requirió a la Dirección de Auditoría de los Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la propia Unidad Técnica de Fiscalización a fin de que realizara la respectiva determinación de costos por concepto de producción de dos videos¹ en comento.

Derivado de lo expuesto, se determina modificar el estudio de fondo de la Resolución INE/CG184/2018.

5. Que en tanto la Sala Superior dejó intocadas las demás consideraciones que sustentan la Resolución identificada como **INE/CG184/2018**, este Consejo General únicamente se abocará al estudio y análisis de lo relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en el considerando **2**, de la respectiva Resolución y específicamente por lo que hace a los gastos de producción acorde con los planteamientos hechos por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Superior, materia del presente Acuerdo.

6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En consecuencia, este Consejo General modifica la **Resolución** número **INE/CG184/2018**, relativa al Procedimiento Administrativo Sancionador de queja en Materia de Fiscalización, instaurado en contra del Partido Revolucionario Institucional, y su entonces Precandidato a Presidente de la República, el C. José Antonio Meade Kuribreña, identificado como **INE/Q-COF-UTF/11/2018**, por lo que hace a los gastos de producción y post-producción de los videos publicados mediante la red social Facebook acorde con los planteamientos hechos por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, por lo que se procede a la modificación ordenada en los términos siguientes:

“(…)

2. Estudio de Fondo. (...)

¹ Constancias que obran de la foja 695 a 700 del expediente.

El estudio de fondo se realizará conforme los apartados siguientes:



- **Apartado A.** Publicidad difundida en la página de la red social Facebook de CNC Querétaro.
- **Apartado B.** Publicidad difundida en la página de la red social Facebook de la CNC Confederación Nacional Campesina.
- **Apartado C.** Determinación del monto que representa el beneficio generado a la precampaña.
- **Apartado D.** Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados
- **Apartado E.** Seguimiento en el informe de precampaña de los ingresos y gastos de los precandidatos al cargo de Presidente de la República, correspondientes al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018.

Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados correspondientes.

(...)

Apartado B. Publicidad difundida en la página de la red social Facebook de la CNC Confederación Nacional Campesina.

Al respecto, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se recibió la queja interpuesta por la C. Joanna Alejandra Felipe Torres, en su carácter de Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen y aplicación de los recursos, específicamente por una aportación de ente prohibido que pudiera derivar en un rebase al tope de gastos de precampaña, derivados de las siguientes publicaciones:

ID	Descripción	Fecha en que se identificó la publicación	Muestra
1	Anuncio de publicidad de un video que se titula "¡Juntos vamos a ganar José Antonio Meade", mismo que corresponde a un evento del PRI en el que aparece el precandidato ofreciendo un discurso. Enlace: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1612173755492692&id=129365273773555	6 de diciembre de 2017.	
2	Anuncio de publicidad de un video titulado "Servir a México y trabajar por él #Meade2018" Enlace: https://www.facebook.com/cnc.confederacion.nacional.campesina/posts/1611712008872200	12 de diciembre de 2017/ 3 de diciembre de 2017.	

En este orden de ideas, resulta relevante precisar que las pruebas presentadas por el quejoso respecto de los conceptos denunciados, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, son de carácter técnico, las cuales sólo pueden alcanzar valor probatorio pleno como resultado de su adminiculación con otros elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, para generar convicción sobre la veracidad de lo afirmado, por lo

que su alcance probatorio se determinará en el estudio de fondo de la controversia planteada.

Como ya se señaló, el quejoso acompañó a su escrito de queja tres enlaces electrónicos de publicidad difundida mediante los mecanismos de publicidad pagada ofrecidos por la red social Facebook. Ahora bien, cabe aclarar que los enlaces remitidos no corresponden necesariamente a la publicidad denunciada, puesto que la publicidad consta de una periodicidad determinada, la cual caduca con el tiempo, en ese sentido el contenido del enlace identificado con el ID 1, conduce a una publicación de CNC Confederación Nacional Campesina realizada el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, sin embargo a dicho del quejoso, dicha publicación fue identificada como publicidad contratada el día seis de diciembre de dos mil diecisiete.

Por otro lado, el contenido del enlace identificado con el ID 2, conduce a una página en la que se explicita la imposibilidad de acceder al contenido original, ello toda vez que el enlace caducó, sin embargo, a dicho del quejoso, dicha publicación fue identificada como publicidad contratada el doce de diciembre de dos mil diecisiete.

Al respecto, consta en autos del expediente en que se actúa, el escrito sin número, recibido por esta autoridad el seis de febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual el **Partido Revolucionario Institucional**, atendió el emplazamiento respectivo, destacándose los argumentos siguientes:

“(…)

En este orden de ideas, desde nuestra perspectiva, lo que la parte quejosa pretende evidenciar es que, en su opinión, la participación del precandidato José Antonio Meade Kuribreña en eventos realizados el 27 de noviembre de 2017 en las oficinas centrales de la Confederación Nacional Campesina y el 3 de diciembre en el inmueble que ocupa el Comité Ejecutivo Nacional del PRI constituyen actos anticipados de precampaña y que en ese contexto la difusión de fotografías o videos de dichos eventos constituyen gastos en beneficio de la precampaña del referido precandidato, que no fueron reportados debidamente y que por tanto no se encuentran amparados por el marco jurídico aplicable y, por ende, se constituyen en una actuación contraria a derecho.

(…)

En concepto de esta representación, la pretensión sancionatoria de la quejosa resulta del todo improcedente, toda vez que sus planteamientos constituyen tan solo pronunciamientos genéricos y dogmáticos, sin que establezca de manera lógica y razonada lo supuestamente irregular de las conductas que reprocha a mi representado (lo que, dicho sea de paso, impide una adecuada defensa de la parte denunciada).

(...)

Sin embargo, en sentido contrario a lo afirmado por la parte quejosa, es nuestra convicción que la actividad política que se pretende reprochar a mi representado, en realidad, es sólo el legítimo ejercicio de los derechos de libre expresión, de reunión y de asociación política que se encuentran tutelados por nuestra Carta Fundamental, así como por la legislación secundaria aplicable, a favor de todos los ciudadanos mexicanos.

(...)

*En consecuencia, desde nuestra perspectiva, **los ciudadanos, aspirantes y precandidatos no se encuentran impedidos de realizar actividades políticas durante los periodos previos al inicio de la precampaña, durante éstas y de las intercampanas, ni, mucho menos, imposibilitados de ejercer a plenitud los derechos de libertad de expresión, de reunión y de asociación con fines políticos que tutela, a favor de todos los ciudadanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,** siempre y cuando, en el caso de las campañas y precampañas, se omita realizar un llamado directo y explícito al voto para las elecciones constitucionales o internas de un partido, así como la difusión de las plataformas electorales respectivas, previo al inicio de los plazos legales señalados en la Ley.*

(...)

Por la misma razón, toda vez que con las constancias de autos no es posible acreditar fehacientemente la comisión de las faltas que reclama la parte denunciante, luego entonces no es factible concluir que, en el presente caso, mi representado hubiese incurrido en alguna falta de vigilancia de la actividad de sus miembros o simpatizantes, es decir, de una culpa in vigilando.

A mayor abundamiento, por una parte, debe quedar claramente establecido que la denuncia muestra una actitud maliciosa y que pretende desorientar o engañar a la autoridad electoral, cuando afirma que la difusión del mensaje que conlleve pagos a Facebook anula el ejercicio volitivo de los usuarios de esa red para decidir si quieren o no tomar conocimiento o imponerse de

*algún mensaje. **Lo cierto es que existen diversas formas de publicidad en Facebook que, si bien implican, un pago**, no sustituyen la decisión de los usuarios de ver o no el material o anuncio respectivo, habida cuenta que deben manifestar su deseo de verlo a través de un “click”. Por otra parte, debe señalarse que, contrariamente a lo afirmado por la parte denunciante, la naturaleza de los mensajes difundidos en Facebook reclamados por el Partido Acción Nacional, requerían en todo caso actos volitivos de receptores de los mensajes, quienes debían contar con una cuenta de usuario en dicha red social, y manifestar, a través de un “click” su voluntad de recibir el mensaje.*

(...).”

Del mismo modo, consta en autos del expediente en que se actúa, el oficio sin número, recibido por esta autoridad el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual el C. Arturo Téllez Yurén, en representación del **C. José Antonio Meade Kuribreña**, atendió el emplazamiento respectivo, resaltando las manifestaciones siguientes:

“(...

Se NIEGA la existencia de cualquier tipo de responsabilidad derivada de los hechos expuestos por el denunciante en su escrito de queja. Asimismo, se NIEGA que mi representado haya tenido participación por sí o por interpósita persona, en la supuesta difusión de las publicaciones señaladas por el quejoso, que la haya ordenado, realizado o planeado y mucho menos que se hubiera beneficiado de dichas publicaciones.

(...)

Como se ve, es el propio Partido Acción Nacional quien admite y señala que la supuesta publicación realizada en las ligas por él señaladas, no fue de autoría de mi representado, y pretende maliciosamente inducir a esa autoridad al error al afirmar que mi representado violentó la normatividad electoral (...).

Al respecto, es menester mencionar que la denuncia realizada por el Partido Acción Nacional, se sustenta en una calificación a priori de “propaganda electoral” en relacionada con la supuesta publicidad en las ligas de internet (...).

Sin embargo, cabe señalar que la calificación de “propaganda electoral” debe ser realizada por autoridad competente en el procedimiento

administrativo sancionador correspondiente, que, en el caso, es la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y no la Unidad Técnica de Fiscalización (...).

Al efecto, la premisa fundamental de la parte denunciante se hace consistir en que la participación del C. José Antonio Meade Kuribreña constituyó una actitud indebida de realización de actos anticipados de precampaña porque a la fecha de difusión de los mensajes propagandísticos reclamados no había dado inicio la etapa de precampaña, misma que inició el 14 de diciembre de 2017. En la lógica de la quejosa, tal difusión constituye propaganda electoral cuyos costos deben ser sumados a los gastos de precampaña del C. José Antonio Meade Kuribreña, o en su caso considerados como no reportados y por tanto, en opinión de la denunciante, deben provocar una sanción por parte de la autoridad electoral administrativa.

En concepto de mi representado, la pretensión sancionatoria de la quejosa resulta del todo improcedente, toda vez que sus planteamientos constituyen tan solo pronunciamientos genéricos y dogmáticos, sin que establezca de manera lógica y razonada lo supuestamente irregular de las conductas que reprocha a mi representado (lo que, dicho sea de paso, impide una adecuada defensa de la parte denunciada). Es decir, no refiere ni señala qué tipo de expresiones específicas podrían ser contraventoras del marco jurídico aplicable o, en su caso, la llevan a concluir la existencia de propaganda electoral ni, mucho menos, esgrime los silogismos o razonamientos jurídicos que pudieran evidenciar la existencia de algún gasto que, por la naturaleza del material, debía ser reportado o que la falta de reporte respectiva constituiría alguna conducta ilícita. Por lo contrario, la parte quejosa se limita, como ya se describió en párrafos precedentes, a enumerar una serie de publicaciones en Facebook, a referir la participación del precandidato Meade Kuribreña en actos intrapartidistas, y a concluir, de manera por demás subjetiva y dogmática, que la publicación de los mensajes en Facebook por parte de la Confederación Nacional Campesina debe cuantificarse a los gastos del precandidato antes mencionado, en virtud de que dicha confederación forma parte de los sectores que conforman al Partido Revolucionario Institucional.

Por otra parte, establece el quejoso que se debe investigar el origen de los recursos con los que se contrató la difusión de los mensajes de Facebook, para contabilizarse como gastos de precampaña del Partido Revolucionario Institucional por resultarle benéficos a dicho partido político y a mi representado. Al efecto, cabe destacar que la parte denunciante realiza sus afirmaciones dogmáticas, sin acompañarlas de

razonamientos lógico-jurídicos que hagan evidente alguna actuación reprochable por parte de mi representado, José Antonio Meade Kuribreña.

(...)

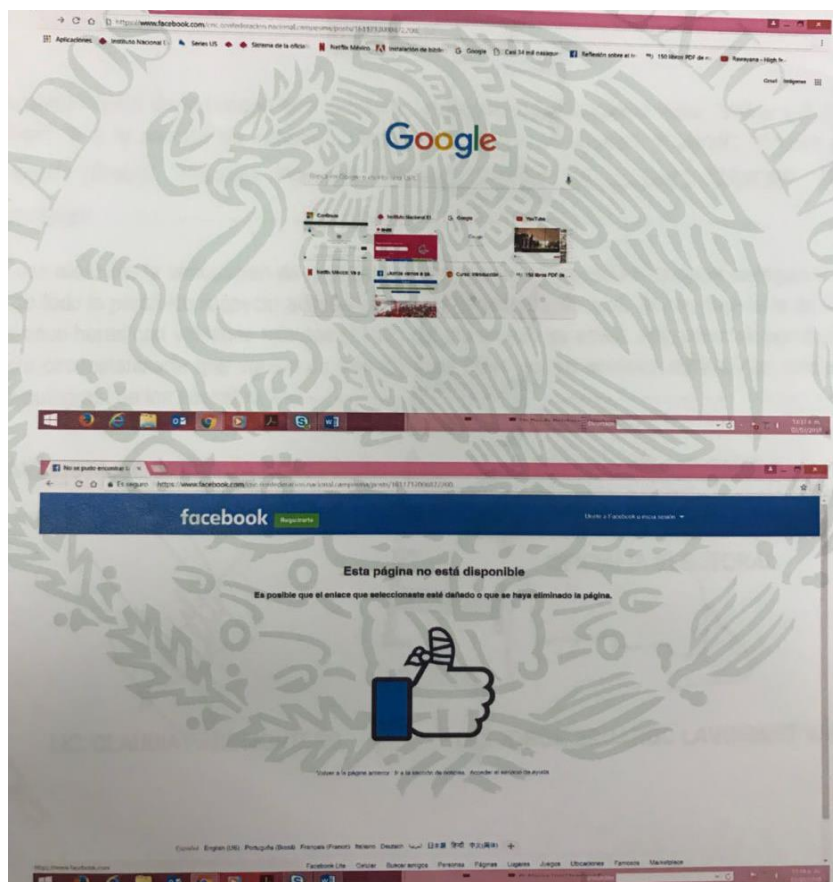
Por otra parte, establece el quejoso que se debe investigar el origen de los recursos con los que se contrató la difusión de los mensajes de Facebook (...).

(...) en este sentido contrario a lo afirmado por la parte quejosa, es nuestra convicción que la actividad política que se pretende reprochar a mi representado, en realidad, es sólo el legítimo ejercicio de los derechos de libre expresión, de reunión y de asociación política que se encuentran tutelados por nuestra Carta Fundamental, así como por la legislación secundaria aplicable, a favor de todos los ciudadanos mexicanos.

(...)”

Dichos escritos constituyen documentales privadas que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

Ahora bien, por lo que hace al enlace enviado por el quejoso, señalado en la tabla que antecede con el ID número 2, no se tuvo acceso a él, como lo corroboró oficialía electoral, y tal como se muestra en el acta circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/216/2018, en los términos siguientes:



Sin embargo, esta autoridad se dio a la tarea de realizar una búsqueda con el fin de localizar el video de mérito. Así las cosas, se levantó razón y constancia de dicha búsqueda, en la que antes de identificar el enlace directo al video, se identificó que en el perfil de “CNC Guerrero” de la Red Social Facebook se compartió dicho video correspondiente originalmente al perfil de CNC Confederación Nacional Campesina. Acto seguido, tras acceder a la publicación original difundida en CNC Confederación Nacional Campesina, se solicitó nuevamente a Oficialía Electoral del Instituto, verificar la existencia del contenido de dicho video, de lo que mediante el oficio número INE/DS/429/2018, se obtuvo lo siguiente:

Acta circunstanciada de verificación de la siguiente página de internet:





<https://www.facebook.com/cen.cnc/videos/vb.129365273773555/1611708152205919/?type=2&theater>

“(…)

Siendo trece horas con ocho minutos (13:08) de la fecha en que se actúa, se procede a realizar la certificación del vínculo de internet referido con antelación:

(...)

Al ingresar el vínculo al navegador “web” y al oprimir la tecla “Enter”, se observa que corresponde a la página de internet de la red social denominada “Facebook”, respecto del video intitulado: “#Meade.”, publicado en el usuario: “CNC Nacional”, video del cual se señalan los detalles a continuación:

Imágenes del video		Datos de la publicación
 <p>Búsqueda en el navegador</p>		Video de duración de un minuto y catorce segundos (00:01:15). Treinta y nueve mil doscientas veintiséis (39 226) reproducciones; fecha de publicación: tres (3) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). Leyéndose debajo del nombre del usuario el texto: “ <i>Servir a México y trabajar por él #Meade2018.</i> ”
 <p>Segundo uno (00:00:01)</p>		
 <p>Segundo treinta y siete (00:37:00)</p>		
 <p>Fin del video</p>		
<p>Nota: El contenido íntegro del video, se encuentra en el disco compacto que se anexa a la presente diligencia en la carpeta identificada como “Anexo”.</p>		

(...).”

Es de mencionar, que la fe de hechos referida, constituye documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados.

En este sentido, toda vez que se tiene identificada la publicidad denunciada, se dirigió la línea de investigación hacia la Confederación Nacional Campesina, así como a la representación local de la Confederación Nacional Campesina en Guerrero², para efectos de conocer el tipo de operación existente para la publicidad

² Toda vez que en la búsqueda realizada por esta autoridad, se obtuvo el enlace certificado no sin antes obtener el enlace de una publicación compartida por “CNC Guerrero.”

investigada, en concreto, se le solicitó información sobre el pago realizado y los servicios prestados para la difusión del material investigado, asimismo en aras del principio de exhaustividad, se le requirió también que informara sobre la producción del video materia del presente procedimiento.

En este sentido, el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho se obtuvo respuesta de la **Confederación Nacional Campesina Guerrero**, por lo que hace a la liga <https://www.facebook.com/cnc.confederacion.nacional.campesina/posts/1611712008872200>, en la que se señala:

“(…)

Niego de forma categórica que en la página de Facebook de mi representada Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Guerrero de haya difundido algún video con el mensaje que obra en el Disco Compacto de análisis...

(…)

Niego de forma categórica que mi representada Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Guerrero haya contratado servicios para la elaboración o producción del video que obra en el Disco Compacto de análisis.

(…)”

De la respuesta anteriormente citada se desprende que la Confederación Nacional Campesina Guerrero **niega fehacientemente cualquier vínculo con el video realizado.**

Por lo que hace al requerimiento realizado a la **Confederación Nacional Campesina**, para efectos de conocer el tipo de operación existente para la publicidad investigada, en concreto, se le solicitó información sobre el pago realizado y los servicios prestados para la difusión del material investigado, en consecuencia, se le requirió también que informara sobre la producción de los videos materia del presente apartado, informó que dicha publicidad fue contratada por un tercero, señalando además lo siguiente:

ID	Descripción	Respuesta CNC
1	<p>Anuncio de publicidad de un video que se titula “¡Juntos vamos a ganar José Antonio Meade”, mismo que corresponde a un evento del PRI en el que aparece el precandidato ofreciendo un discurso!</p> <p>Enlace: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1612173755492692&id=129365273773555</p>	<p>(...) fue realizado por un tercero</p> <p>(...) se publicó el día 3 de diciembre de 2017 al día 15 de diciembre del mismo año.</p> <p>(...) El costo de la publicación referente a la liga fue por la cantidad de \$3,647.47 (tres mil seiscientos cuarenta y siete pesos 47/100 M.N.). (...) El pago se realizó en parcialidades.</p> <p>(...) Fue pagado a través de tarjeta de crédito.</p> <p>(...) Por el momento no se tiene a la mano el estado de cuenta de la tarjeta de crédito.</p> <p>(...)</p> <p>La producción realizada a través del video que aparece en la liga (...) no tuvo costo alguno pues solamente se trató (sic.) de una producción artesanal.</p> <p>Documentación adjunta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copia simple de un documento que contiene los siguientes datos: <ul style="list-style-type: none"> – El encabezado consta de la leyenda siguiente: “Gráficos para: Anuncio – Publicación: “¡Juntos vamos a ganar! José Antonio Meade”: Interacción”. – Importe gastado (acumulado): \$3. 647, 47; – Gasto ordinario promedio: \$95, 99; y – Gráfica en la que se percibe el periodo temporal en el que fue difundida dicha publicidad, el cual no se alcanza a precisar con exactitud, sin embargo, se identifica que comienza el 3 o 4 de diciembre y terminó el 14 o 15 de diciembre. • Dos capturas de pantalla de la publicidad promocionada en las que se identifica: <ul style="list-style-type: none"> – Publicadas desde el perfil oficial de CNC Nacional, – Se despliega la leyenda: Publicado por Francisco Barradas, – Fecha: 3 de diciembre de 2017; y – o Aparecen datos del número de reproducciones y personas alcanzadas.
2	<p>Anuncio de publicidad de un video titulado “Servir a</p>	<p><i>Mi representada no realizó contrato con Facebook (...). Sin embargo. No se puede pasar por alto, el hecho de que el C. Benjamín Obeso Fernández, realizó la contratación del</i></p>

ID	Descripción	Respuesta CNC
	México y trabajar por él #Meade2018” ³ Enlace: https://www.facebook.com/cnc.confederacion.nacional.campesina/posts/1611712008872200 65273773555/1611708152205919/?type=2&theater	<i>servicio de Facebook, a título personal para la publicación del video que aparece en link. Del día 3 de diciembre de 2017, sin tener conocimiento de la vigencia de los servicios prestados por no haber sido contratada por mi representada (...) Se tiene conocimiento que el C. Benjamín Obeso Fernández, realizó el pago con tarjeta bancaria. (...) La producción no tuvo costo alguno pues solamente se trata de una producción artesanal.</i>

Ahora bien, es indispensable señalar que el nueve de marzo de dos mil dieciocho la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral remitió en medio magnético a esta Unidad Técnica de Fiscalización, la totalidad de constancias y anexos que integran el expediente UT/SCG/PE/PAN/CG/32/PEF/89/2018, toda vez que en él se investigan los mismos hechos materia del presente procedimiento, en el ámbito competencial de la citada Unidad, en específico por lo que hace a actos anticipados de campaña, según se advierte del Acuerdo con que se nos dio vista.

En este entendido, es importante señalar como consta en el expediente de mérito, el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, esta Unidad Técnica de Fiscalización acordó la integración del expediente UT/SCG/PE/PAN/CG/32/PEF/89/2018 instruido por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral al Procedimiento Administrativo Sancionador de queja de mérito.

Del expediente integrado al presente procedimiento, obran constancias que muestran la convergencia en las líneas de investigación de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral con la llevada a cabo por la Unidad Técnica de Fiscalización, en concreto por lo que hace al subapartado en turno, el dos y ocho de febrero de dos mil dieciocho mediante escritos de respuesta sin número se obtuvo información proporcionada por la Confederación Nacional Campesina, tal como se puede ver en las fojas número 132-134 y 203-204 de dicho expediente, en las que se indica el nombre del tercero que realizó la contratación de la publicidad investigada, así como los datos del cargo que ostenta y modalidad de pago, lo que a la letra se transcribe:

³ Cabe señalar que en un primer momento se le requirió información respecto la siguiente liga <https://www.facebook.com/cnc.confederacion.nacional.campesina/posts/1611712008872200>, sin embargo al no poder acceder a dicha liga, se le envió un segundo requerimiento con la liga que aparece en el cuadro.

Escrito de respuesta del dos de febrero de dos mil dieciocho

“(…)

b) Si la Confederación Nacional Campesina por si o a través de terceros, pagó por la difusión como publicidad en Facebook, de los videos que se puede encontrar en los siguientes links:

(…)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1612173755492692&id=129365273773555

<https://m.facebook.com/cnc.confederacion.nacional.campesina/posts/1611712008872200>

(…)

Respuesta: La difusión de los videos señalados en los links antes referidos, **fue pagada por terceros.**

c) En caso de ser afirmativa si respuesta, precise las razones por las que contrató la publicidad mencionada en la red social Facebook y proporcione copia del contrato o acto jurídico firmado para tal efecto, así como de la factura o recibo electrónico correspondiente, detallando el periodo de contratación y el número de impactos acordados,

Respuesta: Para facilitar a los miembros de la Confederación Nacional Campesina el conocimiento de los eventos de los que dan cuenta los videos.

El pago de la publicidad se realizó por un tercero mediante la tarjeta bancaria número 5188999104289166. Se acompaña como documentos comprobatorios emitidos para el caso por Facebook (**anexo copia comprobantes**).

d) Especifique el origen de los recursos con que fue cubierto el servicio contratado y remita copia del contrato o acto jurídico celebrado para llevar a cabo la difusión del material precisado.

Respuesta: Recursos privados de los miembros de la Confederación Nacional Campesina, titulares de las tarjetas antes señaladas.

“(…)”

Escrito de respuesta del ocho de febrero de dos mil dieciocho

“(…)

a) El nombre, razón o denominación social de la persona física o moral o ente gubernamental, titular de la tarjeta bancaria a que hace referencia previamente, así como su domicilio para su eventual localización.

Respuesta: *Se trata del compañero **Benjamín Obeso Fernández**, QUIEN TIENE SU DOMICILIO EN LA CALLE DE Lago Alberto número 320, Departamento HS1PJ4, colonia Anáhuac primera sección, Miguel Hidalgo C.P. 11320 en la Ciudad de México.*

b) Si el titular de la tarjeta, tiene alguna relación con la Confederación Nacional Campesina, especificando la misma.

Respuesta: *Si labora en la Confederación Nacional Campesina*

c) De ser el caso, indique si el titular de la tarjeta forma parte de algún órgano de la referida Confederación Nacional Campesina, especificando el mismo.

Respuesta: *Se desempeña en la Coordinación de Comunicación Social de la Confederación Nacional Campesina, como Jefe de Redes Sociales*

“(…)”

Dichos escritos constituyen documentales privadas que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

Así las cosas, la autoridad instructora procedió a requerir Facebook Ireland Limited, al C. Benjamín Obeso Fernández, a efecto de conocer los datos de la publicidad contratada y en este sentido, poder corroborar o rectificar la información obtenida mediante la propia representación nacional de la Confederación Nacional Campesina.

De la misma forma se requirió información al Partido Revolucionario Institucional respecto del segundo video a efecto de que proporcionara información relacionada con los enlaces materia del presente apartado.

Por lo que hace a **Facebook Ireland Limited** se le solicitó que informara sobre los datos del titular de la cuenta “CNC Confederación Nacional Campesina”, así como los datos correspondientes a la contratación de publicidad correspondiente a la publicación materia del presente procedimiento.

Como respuesta, el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho mediante escrito sin número, la Representación de Facebook Ireland Limited desahogó el requerimiento formulado remitiendo toda la documentación correspondiente como se muestra a continuación:

ID	Descripción	Respuesta Facebook
1	Anuncio de publicidad de un video que se titula “¡Juntos vamos a ganar José Antonio Meade”, mismo que corresponde a un evento del PRI en el que aparece el precandidato ofreciendo un discurso. Enlace: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1612173755492692&id=129365273773555	La URL está asociada a campaña publicitaria. Monto gastado \$3,647.47 (Tres mil seiscientos cuarenta y siete pesos 47/100 Moneda Nacional). Rango de tiempo activo de las campañas publicitarias: La campaña publicitaria estuvo activa del 4 de diciembre de 2017, hasta el 14 de diciembre de 2017. Método de pago: Múltiple: Tarjeta Master Card con terminación 9166 por un lado, y método Pay Pal con la cuenta obeso.fdz@gmail.com
2	Anuncio de publicidad de un video titulado “Servir a México y trabajar por él #Meade2018” ⁴ Enlace: https://www.facebook.com/cnc.cnc/videos/vb.129365273773555/1611708152205919/?type=2&heater	La URL está asociada a campaña publicitaria. Monto gastado \$1,883.95 (Mil ochocientos ochenta y tres pesos 95/100 Moneda Nacional). Rango de tiempo activo de las campañas publicitarias: activa del 4 de diciembre de 2017, hasta el 14 de diciembre de 2017. Método de pago: Múltiple: Tarjeta Master Card con terminación 9166

⁴ Cabe señalar que en un primer momento se le requirió información respecto la siguiente liga <https://www.facebook.com/cnc.confederacion.nacional.campesina/posts/1611712008872200>, sin embargo al no poder acceder a dicha liga, se le envió un segundo requerimiento con la liga que aparece en el cuadro.

ID	Descripción	Respuesta Facebook
		por un lado, y método Pay Pal con la cuenta obeso.fdz@gmail.com

Asimismo, esta autoridad requirió al **C. Benjamín Obeso Fernández** a fin de que confirmara la contratación de la publicación señalada y en ese sentido, que proporcionara toda la documentación que acreditara su dicho. Como consecuencia, el nueve de marzo en escrito de respuesta sin número, el C. Benjamín Obeso Fernández admitió la personalidad acreditada en el expediente, así como haber sido responsable de la publicidad pagada en la Red Social Facebook, sin embargo, negó haber contratado algún servicio por concepto de producción en lo relativo al video investigado, puesto que según su dicho:

ID	Descripción	Respuesta C. Benjamín Obeso Fernández
1	Anuncio de publicidad de un video que se titula “¡Juntos vamos a ganar José Antonio Meade”, mismo que corresponde a un evento del PRI en el que aparece el precandidato ofreciendo un discurso. Enlace: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1612173755492692&id=129365273773555	Por lo que respecta al video (...) el costo de la publicación fue por la cantidad de \$3,647.47 (tres mil seiscientos cuarenta y siete pesos 47/100 M.N.). El pago de la publicación de ambos links, fue realizado con la tarjeta de crédito número xxxxxxxxxxxx9166. Fue pagada con recursos propios. La producción de dichos videos no tuvo costo alguno; ya que solamente se trata de una producción artesanal.
2	Anuncio de publicidad de un video titulado “Servir a México y trabajar por él #Meade2018” ⁵ Enlace: https://www.facebook.com/cnc.cnc/videos/vb.129365273773555/1611708152205919/?type=2&heater	Por lo que respecta al video (...) el costo de la publicación fue por la cantidad de \$1,883.95 (Mil ochocientos ochenta y tres pesos 95/100 Moneda Nacional). El pago de la publicación de ambos links, fue realizado con la tarjeta de crédito número xxxxxxxxxxxx9166. Fue pagada con recursos propios. La producción de dichos videos no tuvo costo alguno; ya que solamente se trata de una producción artesanal.

⁵ Cabe señalar que en un primer momento se le requirió información respecto la siguiente liga <https://www.facebook.com/cnc.confederacion.nacional.campesina/posts/1611712008872200>, sin embargo al no poder acceder a dicha liga, se le envió un segundo requerimiento con la liga que aparece en el cuadro.

Ahora bien, mediante escrito de respuesta sin número se obtuvo información proporcionada por el ciudadano, en atención al requerimiento realizado por la Unidad Técnica de lo Contencioso de este instituto, tal como se puede ver en las fojas número 280-282 del expediente UT/SCG/PE/PAN/CG/32/PEF/89/2018, señalando lo que a la letra se transcribe:

“(…)

Respuesta: me encargo de diseñar, redactar, programar y difundir todas las publicaciones que se realizan en el perfil www.facebook.com/cen.cnc.

b) señale si la difusión de los materiales localizables en los links:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1612173755492692&id=129365273773555

<https://www.facebook.com/cnc.confederacion.nacional.campesina/posts/1611712008872200>.

Fue contratada a título personal o bien, a solicitud de un tercero (…)

Respuesta: Fue a título personal, bajo mi criterio y experiencia que tengo en eventos públicos, al considerar que los contenidos de los videos podrían ser interesantes para los miembros de la Confederación Nacional Campesina y relevantes para su publicación.

(…).”

Por lo que hace a los requerimientos realizados al Partido Revolucionario Institucional, se obtuvo la siguiente información:

ID	Descripción	Respuesta Partido Revolucionario Institucional
1	Anuncio de publicidad de un video que se titula “¡Juntos vamos a ganar José Antonio Meade”, mismo que corresponde a un evento del PRI en el que aparece el precandidato ofreciendo un discurso. Enlace: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1612173755492692&id=129365273773555	<i>Al respecto, a nombre de mi representado, hago de su conocimiento que en ningún momento realizó, por sí o por terceras personas, pago alguno para la difusión de publicidad en las ligas referidas. Tampoco tuvo mi representado conocimiento de que la Confederación Nacional Campesina hubiera realizado dicha operación. Respecto de los demás apartados, en virtud de no haber realizado ningún pago o contratación, no procede ninguna respuesta.</i> <i>Se señala que mi representado no realizó ni contrató, por sí o por terceras personas, la producción de los videos objeto del presente procedimiento, por lo que resulta imposible señalar las características o costos de producción respectiva.</i>
2	Anuncio de publicidad de un video titulado “Servir a México y trabajar por él #Meade2018” ⁶ Enlace: https://www.facebook.com/cnc.cnc/videos/vb.129365273773555/1611708152205919/?type=2&heater	<i>Por lo que hace al material correspondiente a la liga, el mismo no pudo ser accesado, toda vez que la página no estaba disponible.</i> En respuesta al segundo requerimiento: <i>Se señala que mi representado NO CONTRATÓ, por sí o por parte de algún tercero, los servicios de elaboración y/o producción de ninguno de los dos videos.</i>

Ahora bien, mediante escrito de respuesta sin número se obtuvo información proporcionada por sujeto incoado, en atención al requerimiento realizado por la Unidad Técnica de lo Contencioso de este instituto, tal como se puede ver en las fojas número 116-121 del expediente UT/SCG/PE/PAN/CG/32/PEF/89/2018, señalando lo que a la letra se transcribe:

“(…)

⁶ Cabe señalar que en un primer momento se le requirió información respecto la siguiente liga <https://www.facebook.com/cnc.confederacion.nacional.campesina/posts/1611712008872200>, sin embargo al no poder acceder a dicha liga, se le envió un segundo requerimiento con la liga que aparece en el cuadro.

Informa si contrató por si o a través de terceros, la difusión como publicidad en Facebook, de los videos que se puede encontrar en las siguientes links:

- a. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1612173755492692&id=129365273773555
- b. <https://www.facebook.com/cnc.confederacion.nacional.campesina/posts/1611712008872200>

*RESPUESTA: **No**, mi representado no contrató de manera directa, ni por interpósita persona, la difusión de los referidos videos en los links señalados*

(...)”

Dichos escritos constituyen documentales privadas que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

Por lo que hace a la producción de los videos materia del presente apartado, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos a efecto de conocer si los materiales denunciados fueron pautados por dicha Dirección, y en su defecto, en el caso negativo, de que realizara un análisis de los elementos de producción de los mismos.

Como resultado, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos desahogó el requerimiento formulado señalando que dichos **materiales no fueron pautados**, no obstante, remitió un análisis de los elementos de producción y post producción identificados, a saber:

- **Calidad de video para transmisión Broadcast:** Manejo de resolución, códecs tasa de *bit rate* y tipo de compresión para poder ser radiodifundidos.
- **Producción:** probable uso de alguno de los siguientes equipos: semi-profesionales o profesionales de producción como son: Cámaras de foto o

video semi-profesionales a profesionales, iluminación, micrófonica semi-profesional a profesional, grúas, *Dolly cam*, *steady cam*, dron, entre otros.

- **Manejo de imagen:** calidad de imagen, encuadres, movimiento de cámaras, definición, uso de imágenes de *stock* y locaciones.
- **Audio:** Calidad de grabación, locutores, *jingles*, mezcla de audios.
- **Gráficos:** Diseño, animaciones, calidad de los mismo.
- **Post-producción:** Edición, efectos, mezcla de efectos y animaciones con imágenes.
- **Creatividad:** Uso de guion y contenidos.

De lo que se desprende que los videos objeto de la investigación cuentan con los elementos siguientes:

Video 1: "Juntos vamos a ganar José Antonio Meade" Duración: 01: 04 min.	
Calidad de video para transmisión Broadcast	No
Producción	Sí
Imagen	Sí
Audio	Sí
Gráficos	Sí
Post-producción	Sí
Creatividad	Sí

Video 2: "Servir a México y trabajar por él" Duración: 01: 15 min.	
Calidad de video para transmisión Broadcast	Sí
Producción	Sí
Imagen	Sí
Audio	Sí
Gráficos	Sí
Post-producción	Sí
Creatividad	Sí

Derivado de lo anterior, se solicitó a la Dirección de Auditoría⁷ a efecto de que revisara si en sus archivos obraba el reporte de alguno de los materiales investigados, o que, en su defecto, remitiera una respectiva matriz de precios considerando los elementos relacionados con la producción de los mismos durante el Proceso Electoral 2017-2018, detectados por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

En consecuencia, la Dirección de Auditoría indicó que no identificó algún registro contable por concepto de producción relacionado con los videos materia del

⁷ Mediante oficio INE/UTF/DRN/1196/2018, de fecha veintiuno de agosto de dos mil dieciocho.

presente procedimiento, adicionalmente desahogó el requerimiento de mérito, por lo que realizó la respectiva determinación del costo, como se aprecia a continuación:

“(…)

Proveedor	Folio de la Factura y/o cotización	Concepto	Costo Unitario con IVA incluido
Magno Multimedia SCP	Cotización	Servicio de Producción, edición, post-producción y adecuación de materiales audiovisual.	\$10,000.00

Tocante al segundo punto, es importante señalar que aun y cuando del análisis y de la valoración precisada en el oficio núm. INE/DEPPP/DE/DATE/0-769/2018, señalan que los videos observados en el presente procedimiento administrativo sancionador de queja fueron diseñados con calidad de un spot para ser pautado, sin embargo, se observó que estos fueron transmitidos vía redes sociales, por lo que no se puede comparar con un video que es transmitido en una televisora; expuesto lo anterior, esta Dirección de Auditoría se dio a la tarea de identificar un costo similar por la producción, post-producción y edición de video para redes sociales, el cual se detalla en el párrafo que antecede.

Referente al tercer punto, le informo que la metodología utilizada para la determinación del costo del punto anterior, fue conforme a lo establecido en artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, como se describe a continuación:

- *Se consideró la información relacionada con los registros contables presentados a través del Sistema Integral de Fiscalización por los sujetos obligados.*
- *Ya en los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran ser comparables con los gastos no reportados.*
- *Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo por concepto de producción y post producción de video para redes sociales.*
- *Y finalmente, una vez elaborada la matriz de precios la cual se presenta como **ANEXO 1** del presente oficio, se determinó que las facturas presentadas por diversos proveedores fueran las que más se ajustaran en*

términos de unidad de medida, ubicación y de más características, por lo que se tomó como base para la determinación del costo.

(...).

Ahora bien, para facilitar el análisis de la información se presenta un cuadro comparativo entre las pruebas remitidas en el escrito de denuncia y las pruebas obtenidas por esta autoridad investigadora:

Concepto	Dato según denunciante	Respuesta CNC Nacional	Respuesta Facebook	Respuesta Benjamín Obeso	Respuesta DEPPP	Respuesta DAPPAPO
Video “¡Juntos vamos a ganar José Antonio Meade” del link: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1612173755492692&id=129365273773555						
Información general	El seis de diciembre de dos mil diecisiete, apareció en la red social Facebook un anuncio de publicidad de la cuenta CNC Nacional.	Señala que el video fue contratado por un tercero. (Benjamín Obeso Jefe de Redes Sociales en la Coordinación e Comunicación Social de la Confederación Nacional Campesina)	Remite información sobre los administradores de la página oficial de facebook de la Confederación Nacional Campesina, entre sus nombres aparece el C. Benjamín Obeso Fernández.	Acepta haber pagado con recursos propios la publicidad en las red social Facebook.	Determinó que el video cuenta con elementos de producción, imagen, audio, gráficos, post-producción y creatividad	Informó que no se reportaron gastos por concepto producción del video.
Fecha y duración de la publicación	Publicidad detectada el 6 de diciembre de 2017.	Del 3 de diciembre al 15 de diciembre de 2017.	Del 4 de diciembre al 14 de diciembre de 2017.	N/A	N/A	N/A
Monto pagado	N/A	\$3,647.47	\$3,647.47	\$3,647.47	N/A	N/A
Modalidad del pago	N/A	Mediante tarjeta bancaria de terminación 9166	Mediante tarjeta Master Card terminación 9166 y PayPal de la Cuenta obeso.fdz@gmail.com	Mediante la tarjeta de crédito de terminación 9166.	N/A	N/A
Gastos de producción.	N/A	No tuvo costo, se trató de producción artesanal	N/A	No tuvo costo, se trató de producción artesanal	Si, cuenta con elementos de producción, específicamente, Producción, Imagen, Audio, Gráficos, Post-producción, y Creatividad	Determinó un costo de producción por \$10,000.00
Video “Servir a México y trabajar por él” del link: https://www.facebook.com/cen.cnc/videos/vb.129365273773555/1611708152205919/?type=2&theater						
Información general	El doce de diciembre de dos mil diecisiete, apareció en la red social Facebook un anuncio de publicidad de la	Señala que el video fue contratado por un tercero. (Benjamín Obeso Jefe de Redes Sociales en la Coordinación e Comunicación Social de la Confederación Nacional Campesina)	Remite información sobre los administradores de la página oficial de facebook de la Confederación Nacional Campesina, entre sus nombres aparece el C.	Acepta haber pagado con recursos propios la publicidad en las red social Facebook	Determinó que el video cuenta con elementos de producción, imagen, audio, gráficos, post-producción y creatividad; así como calidad de	Informó que no se reportaron gastos por concepto producción del video.

Concepto	Dato según denunciante	Respuesta CNC Nacional	Respuesta Facebook	Respuesta Benjamín Obeso	Respuesta DEPPP	Respuesta DAPPAPO
	cuenta CNC Nacional		Benjamín Obeso Fernández.		video para transmisión Broadcast.	
Fecha y duración de la publicación	Publicidad detectada el 12 de diciembre de 2017.	Del 3 de diciembre, sin tener conomiento de la vigencia.	Del 3 de diciembre al 14 de diciembre de 2017.	N/A	N/A	N/A
Monto pagado	N/A	\$1,883.95 (remiten recibo de facebook)	\$1,883.95	\$1,883.95	N/A	N/A
Modalidad del pago	N/A	Mediante tarjeta bancaria número 5188999104289166	Mediante tarjeta Master Card terminación 9166 y PayPal de la Cuenta obeso.fdz@gmail.com	Mediante la tarjeta de crédito de terminación 9166	N/A	N/A
Gastos de producción.	N/A	No tuvo costo, se trató de producción artesanal	N/A	No tuvo costo, se trató de producción artesanal	Determinó que el video cuenta con elementos de producción, imagen, audio, gráficos, post-producción y creatividad; así como calidad de video para transmisión Broadcast.	Determinó un costo de producción por \$10,000.00

Como se advierte en las respuestas señaladas, existe convergencia respecto al monto pagado por la publicidad, así como la modalidad por la que el mismo fue pagado, en todo caso se presenta una divergencia de un día respecto a la temporalidad en la que dicha publicidad fue difundida.

Dicha divergencia es relevante para el análisis de los hechos investigados, dado que los mismos cobran relevancia para esta autoridad, en el contexto de las precampañas electorales, las cuales, como se estableció en el Resolutivo **SÉPTIMO** del Acuerdo **INE/CG427/2017**, tuvieron lugar del día catorce de diciembre de dos mil diecisiete al once de febrero de dos mil dieciocho

Por otro lado, resulta indispensable destacar que además de la publicidad pagada, para que esta publicidad existiera, previo a ello se debió realizar una producción y postproducción de los videos posteriormente difundidos en la red social Facebook se identificaron gastos realizados por concepto de producción y/o post-producción de los videos difundidos.

No pasa desapercibido para esta autoridad, que tanto la Confederación Nacional Campesina, así como el C. Benjamín Obeso Fernández, refirieron que los videos pautados en Facebook únicamente habían tenido una producción artesanal que no

generaron gasto alguno, sin embargo, no presentaron elemento de prueba alguno que permita a esta autoridad administrativa tener certeza de dicha negativa.

No obstante, lo anterior, como ya se señaló forma parte de las constancias que integran el procedimiento de mérito el análisis realizado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos respecto de los elementos de producción y post producción de los videos en comento de conformidad con su expertis en la materia, circunstancia que en ningún momento fue desacreditada por los sujetos incoados.

En consecuencia, al respecto es dable concluir que esta autoridad cuenta con elementos aptos y suficientes para determinar que los videos objeto de estudio si contaron con una producción y post producción que generaron un gasto adicional a la publicidad pagada en la red social.

Ahora bien, resulta necesario traer a colación lo dispuesto por los artículos 211, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los artículos 193 y 195 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra establecen:

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

“Artículo 211.

*1. Para los efectos de este Capítulo, se entenderá por propaganda de precampaña al conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo de precampaña difunden los precandidatos con el propósito de dar a conocer sus propuestas y obtener la candidatura a un cargo de elección popular.
(...)”*

Reglamento de Fiscalización

Artículo 193

“Concepto de precampaña y tipos de gastos

1. Se entiende por precampaña electoral al conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido.

2. Se entiende por actos de precampaña electoral las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular.

3. Se entiende por propaganda de precampaña el conjunto de escritos, **publicaciones**, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo establecido por esta Ley y el que señale la convocatoria respectiva difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas. La propaganda de precampaña deberá señalar de manera expresa, por medios gráficos y auditivos, la calidad de precandidato de quien es promovido.
(...)

“Artículo 195

De los conceptos integrantes del gasto de precampaña

1. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 75, numeral 1 de la Ley de Partidos de estimarán como gastos de precampaña los relativos a propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos, operativos, de propaganda utilitaria o similares, de **producción de los mensajes para radio y televisión**, anuncios espectaculares, bardas, salas de cine y de **internet**, gastos realizados en encuestas y estudios de opinión que tengan por objeto conocer las preferencias respecto a quienes pretendan ser precandidatos del partido y cuyos resultados se den a conocer durante el proceso de selección de candidatos y se deberá cumplir con los requisitos dispuestos en el presente Reglamento, respecto de los gastos de campaña.”

Asimismo, en concatenación con las disposiciones normativas señaladas el artículo 75, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos que señala lo que al pie de la letra se señala:

“Artículo 75

1. El Consejo General a propuesta de la Comisión de Fiscalización y previo al inicio de las precampañas determinará el tipo de gastos que serán estimados como de precampaña de acuerdo a la naturaleza de las convocatorias emitidas por los partidos políticos”

En este sentido, el ocho de diciembre de dos mil diecisiete en sesión extraordinaria del Consejo General, se aprobó el Acuerdo **INE/CG597/2017** mediante el cual se establecieron las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se consideran como de precampaña para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018.

De dicho acuerdo, se desprende de su Resolutivo **PRIMERO** lo siguiente:

“GASTOS DE PRECAMPAÑA.

Artículo 2. *En términos de lo establecido en los artículos 209, párrafo 4; 211, párrafos 1, 2, y 3; 230 en relación con el 243, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 195, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se consideran gastos de precampaña los siguientes conceptos:*

(...)

d) **Gastos de producción de los mensajes de audio y video:** *comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al mismo objetivo;*

e) *Gastos realizados en anuncios espectaculares, salas de cine y de **propaganda en internet**, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Reglamento, respecto de los gastos de campaña;*

(...)

Artículo 3. *Los partidos políticos, a más tardar el 13 de diciembre del 2017, deberán retirar toda su propaganda genérica e institucional, siendo genérica aquella en la que se publique o difunda el emblema o la mención de lemas del partido político correspondiente, sin que se identifique algún precandidato en particular.*

(...)”

En ese sentido, resulta relevante analizar el contenido de la publicidad objeto de estudio, tal y como continuación se precisa:

(...)

Visto lo anterior, de la valoración de cada uno de los elementos probatorios que se obtuvieron durante la sustanciación del procedimiento de mérito, mismos que se concatenaron entre sí, esta autoridad administrativa electoral tiene certeza de lo siguiente:

- Que Oficialía Electoral dio fe de la existencia de las publicaciones en la página de CNC Confederación Nacional Campesina de la red social Facebook, que se muestran a continuación:

ID	Descripción	Fecha en que se identificó la publicación	Muestra
1	<p>Anuncio de publicidad de un video que se titula “¡Juntos vamos a ganar José Antonio Meade”, mismo que corresponde a un evento del PRI en el que aparece el precandidato ofreciendo un discurso!</p> <p>Enlace:</p> <p>https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1612173755492692&id=129365273773555</p>	6 de diciembre de 2017.	
2	<p>Anuncio de publicidad de un video titulado “Servir a México y trabajar por él #Meade2018”</p> <p>Enlace:</p> <p>https://www.facebook.com/cen.cnc/videos/vb.129365273773555/1611708152205919/?type=2&theater</p>	12 de diciembre de 2017/ 3 de diciembre de 2017.	

- Que el Partido Revolucionario Institucional, y/o su entonces precandidato a la Presidencia de la República el C. José Antonio Meade Kuribreña, **niegan haber contratado** la publicidad, así como haber realizado gastos por producción o post-producción de los videos.
- Que la Confederación Nacional Campesina confirma que la publicación fue difundida en su página de la **red social Facebook**, mediante el esquema de **publicidad**, aceptando que hubo un pago de por medio para su difusión; sin

embargo, niega haber realizado algún gasto por concepto de producción de los videos.

- Que la publicidad investigada fue **pagada con recursos propios** del C. Benjamín Obeso Fernández, sin embargo, niega haber realizado algún gasto por concepto de producción de los videos.
- Que el pago por la difusión de los videos fue debidamente acreditado, por lo que hace al número **1** por la cantidad de **\$3,647.47 (tres mil seiscientos cuarenta y siete pesos 47/100 M.N.)**; y por el video identificado con el número **2** por un monto de **\$1,883.95 (mil ochocientos ochenta y tres pesos 95/100 M.N.)**.
- Que la publicidad investigada fue difundida del 3 (video identificado con el id 2) y 4 (video identificado con el id 1) de diciembre al 14 de diciembre de 2017 por lo que, en lo relativo al día **14 de diciembre de 2017**, la misma se enmarcó en la fase de **precampaña electoral**.
- Que según el análisis de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos existieron elementos de producción y post-producción en ambos videos.
- Que de acuerdo a la matriz de precios realizada para determinar los costos no reportados para el Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, remitida por la Dirección de Auditoría, se obtuvieron los siguientes costos:
 - Video “¡Juntos vamos a ganar José Antonio Meade!”: un costo por la cantidad de **\$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.)**.
 - Video “Servir a México y trabajar por él” con un costo de **\$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.)**.

Dicho lo anterior, se destaca que la publicidad investigada fue difundida mediante el perfil oficial de la Red Social Facebook de la Confederación Nacional Campesina, tal como la empresa Facebook Ireland Limited validó en la documentación que remitió a esta autoridad, de modo que considerando los elementos expuestos, es posible acreditar que existió un servicio pagado por un tercero para beneficiar a la precampaña electoral del C. José Antonio Meade Kuribreña, durante un día, esto es el 14 de diciembre de 2017.

Aunado a lo anterior, se tiene acreditado que además del servicio pagado por un tercero para contratar la publicidad de los videos materia del presente procedimiento, también se realizaron gastos por concepto de producción y post-producción, de conformidad con el análisis y valoración de los videos realizado por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos existieron.

Como se puede ver, en la publicidad investigada existen elementos que permiten concluir la existencia de un posicionamiento temporal de un solo día a favor de determinada precandidatura, el cual, fue producto en primer término de la producción y post-producción de los videos; y como consecuencia de ello la publicidad contratada por un tercero.

Al respecto, sirve como criterio orientador lo establecido por los órganos jurisdiccionales mediante la **TESIS LXXXII/2016**, que a la letra señala:

PROPAGANDA ELECTORAL DIFUNDIDA EN INTERNET. ES INSUFICIENTE LA NEGATIVA DEL SUJETO DENUNCIADO RESPECTO DE SU AUTORÍA PARA DESCARTAR LA RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL.-

*De la interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 462, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 14, 15 y 16, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se concluye que para que las autoridades electorales descarten la responsabilidad de una persona por la difusión de propaganda que pudiera resultar contraventora de la normativa electoral resulta insuficiente la negativa de los denunciados de ser los responsables de la información alojada en sitios de **internet**, pues, para ello es necesario que se acredite mediante elementos objetivos que se realizaron actos tendentes a evitar que se siguiera exhibiendo la propaganda denunciada en la plataforma de **internet** o la información atinente a su persona, que se empleara -sin su autorización- su nombre e imagen, o bien que el responsable de la página de **internet** es una persona diversa a aquella a quien se atribuye su pertenencia, toda vez que las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia indican que si se advierte o conoce de la existencia de algún instrumento en el cual se emplee su imagen, o bien, que se difunda información a su nombre sin su consentimiento, lo ordinario es que implemente actos idóneos y eficaces para evitar, de manera real y objetiva, que la difusión de la propaganda continúe, cuando pudiera vulnerar lo dispuesto en la normativa electoral.*

Quinta Época:

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. [SUP-REP-579/2015](#).—Recurrente: Partido Revolucionario Institucional.—Autoridad

*responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.—24 de febrero de 2016.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Ausente: María del Carmen Alanís Figueroa.—Secretaria: Georgina Ríos González. **La Sala Superior en sesión pública celebrada el doce de octubre de dos mil dieciséis, aprobó por unanimidad de votos, la tesis que antecede.***
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 67 y 68.

De esta manera, resulta insuficiente el dicho de los sujetos incoados, quienes haciendo referencia a preceptos procedimentales pretenden desestimar los hechos investigados sin explicitar con claridad qué tipo de operaciones estuvieron implicadas para la difusión del material investigado.

Como se desprende del análisis presentado, existen elementos suficientes para calificar los hechos investigados como una **aportación**, dado que las aportaciones se realizan de **forma unilateral**, es decir, no se requiere un acuerdo de voluntades, lo que implica que una vez verificada la liberalidad⁸, el beneficio se presenta sin necesidad de la voluntad del receptor e incluso en contra de la misma.

Así, las aportaciones son liberalidades que **no conllevan una obligación de dar** y, por consiguiente, no implican una transmisión de bienes o derechos, resultando en todo caso un **beneficio económico no patrimonial**.

Al respecto es importante señalar que el artículo 2332 del Código Civil Federal, contempla que la “*Donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes.*”

Esto es, la donación reviste las particularidades siguientes:

- Es un **acuerdo de voluntades**, entendiendo como un acto jurídico (contrato) realizado por dos partes que libremente manifiestan su voluntad con la finalidad de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones.
- El objeto del contrato se traduce en una **obligación de dar**, esto es, transferir gratuitamente bienes presentes, lo que, tomando en consideración lo

⁸ Entendiendo como liberalidad un acto de atribución patrimonial, renuncia o asunción de una obligación, a título gratuito sin que exista contraprestación alguna.

establecido en el Libro Segundo "De los Bienes", Título Primero "Disposiciones Preliminares" y Título Segundo "Clasificación de los Bienes" del Código Civil Federal, así como lo señalado por la doctrina, se entiende como la transmisión gratuita de **derechos reales o crediticios**. Lo anterior implica que la donación siempre trae aparejado un incremento en el patrimonio del donatario y el correlativo empobrecimiento del patrimonio del donante.

- Se trata generalmente de un contrato que impone obligaciones para una de las partes que no dependen de la realización o cumplimiento de obligaciones por la contraparte, es decir, las obligaciones del donante no encuentran un correlativo en el donatario, el cual, en la figura lisa y llana, únicamente detenta derechos.

Ahora bien, por lo que hace a las aportaciones cabe realizar las precisiones siguientes:

- Las aportaciones se realizan de **forma unilateral**, es decir, no se requiere un acuerdo de voluntades, lo que implica que una vez verificada la liberalidad⁹, **el beneficio se presenta sin necesidad de la voluntad del receptor e incluso en contra de la misma**.

Tal situación es de absoluta relevancia puesto que la responsabilidad de las partes involucradas varía, ya que al afirmar que la existencia de una aportación no depende de la aceptación del beneficiado, este último podría resultar, en todo caso, responsable de forma culposa.

- Las aportaciones son liberalidades que **no conllevan una obligación de dar** y, por consiguiente, no implican una transmisión de bienes o derechos, resultando en todo caso un **beneficio económico no patrimonial**.

En efecto, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, **el beneficio es un “Bien que se hace o se recibe”, concepto que no necesariamente implica una contextualización patrimonial, es decir, que no se entiende como un bien material o jurídico.**

Por tanto, al tratarse de un beneficio económico no patrimonial, el beneficiario no se encuentra en posibilidades de devolverla o rechazarla, dado que su existencia no depende en manera alguna de un acto de aceptación o repudio realizado.

⁹ Se insiste, entendiendo como liberalidad un acto de atribución patrimonial, renuncia o asunción de una obligación, a título gratuito sin que exista contraprestación alguna.

Ahora bien, una vez realizadas las distinciones entre una donación y una aportación, en la especie se tiene que la figura que se actualiza es una aportación a favor de la precampaña del Precandidato a Presidencia de la República el C. José Antonio Meade Kuribreña, respecto de la producción y post-producción de los videos materia del presente procedimiento, así como de la publicidad pautaada en la red social Facebook.

En consecuencia, derivado de las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir que esta autoridad cuenta con elementos para determinar que el Partido Revolucionario Institucional, así como el C. José Antonio Meade Kuribreña, entonces precandidato a Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos, vulneraron lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el 127 del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse **fundado**, respecto de los hechos materia del apartado en que se actúa.

APARTADO C. DETERMINACIÓN DEL MONTO QUE REPRESENTA EL BENEFICIO GENERADO A LA PRECAMPAÑA.

Derivado de los argumentos de hecho y derecho esgrimidos en el apartado B, de la presente Resolución, se tuvieron acreditados gastos que beneficiaron la precampaña del C. José Antonio Meade Kuribreña entonces precandidato a Presidente de la República por el Partido Revolucionario Institucional.

Así, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos, se tienen elementos que generan certeza en esta autoridad de que existieron egresos no registrados por concepto de producción y post-producción de los videos materia del presente procedimiento, así como por publicidad contratada mediante la red social Facebook que generó con ello un beneficio a la propia precampaña.

En este sentido, toda vez que para la determinación del beneficio obtenido obran en el expediente de mérito diversa información y documentación, se estima procedente realizar en análisis mediante dos apartados, de conformidad con lo siguiente:

C.1 Determinación por concepto de producción de los videos.

En ese sentido, la Sala Superior señaló que es importante que el Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones que tiene como

finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.

Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente¹⁰:

- a)** Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio.
- b)** Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
- c)** Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
- d)** Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación y sus componentes deberán ser comparables.
- e)** Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

Así en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y comparable.

Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, valorará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.

Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se

¹⁰ Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-4/2016

debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.

En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación comprobatoria.

De lo anterior, forma parte de las constancias que integran el procedimiento de mérito la matriz de precios realizada para determinar los costos no reportados por concepto de producción y post-producción de videos para el Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, remitida por la Dirección de Auditoría, en la que se obtuvo, lo siguiente:

“(…)

Proveedor	Folio de la Factura y/o cotización	Concepto	Costo Unitario con IVA incluido
Magno Multimedia SCP	Cotización	Servicio de Producción, edición, post-producción y adecuación de materiales audiovisual.	\$10,000.00

Tocante al segundo punto, es importante señalar que aun y cuando del análisis y de la valoración precisada en el oficio núm. INE/DEPPP/DE/DATE/0-769/2018, señalan que los videos observados en el presente procedimiento administrativo sancionador de queja fueron diseñados con calidad de un spot para ser pautado, sin embargo, se observó que estos fueron transmitidos vía redes sociales, por lo que no se puede comparar con un video que es transmitido en una televisora; expuesto lo anterior, esta Dirección de Auditoría se dio a la tarea de identificar un costo similar por la producción, post-producción y edición de video para redes sociales, el cual se detalla en el párrafo que antecede.

Referente al tercer punto, le informo que la metodología utilizada para la determinación del costo del punto anterior, fue conforme a lo establecido en artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, como se describe a continuación:

- *Se consideró la información relacionada con los registros contables presentados a través del Sistema Integral de Fiscalización por los sujetos obligados.*
- *Ya en los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran ser comparables con los gastos no reportados.*
- *Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo por concepto de producción y post producción de video para redes sociales.*
- *Y finalmente, una vez elaborada la matriz de precios la cual se presenta como **ANEXO 1** del presente oficio, se determinó que las facturas presentadas por diversos proveedores fueran las que más se ajustaran en términos de unidad de medida, ubicación y de más características, por lo que se tomó como base para la determinación del costo.*

(...).

En consecuencia, por lo que hace al video **1** un costo unitario por la cantidad de **\$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.)**; y por el video identificado con el número **2** la cantidad de **\$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.)**, de cuya suma se desprende un monto involucrado de **\$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.)**, el cual esta autoridad concluye que resulta razonable y objetivo considerar para la determinación de la sanción que corresponde, como se muestra en el siguiente cuadro:

ID	Video	Gastos por producción y post-producción	Monto total del beneficio obtenido en esta queja
1	Gastos de producción y post-producción del video "¡Juntos vamos a ganar José Antonio Meade",	\$10,000.00	\$20,000.00
2	Gastos de producción y post-producción del video "¡Servir a México y trabajar por él #Meade2018"	\$10,000.00	

Lo anterior tiene como finalidad salvaguardar los principios de prevención general y prevención específica, de tal manera que la sanción impuesta sea una

consecuencia suficiente para que en lo futuro no se cometan nuevas y menos las mismas violaciones a la ley, preservando en todo momento el principio de proporcionalidad en la imposición de sanciones y el respeto a la prohibición de excesos.

Así, considerando los parámetros objetivos y razonables del caso concreto, se justifica el quantum de la sanción a imponer.

Por último, es importante destacar que si bien es cierto los videos únicamente fueron difundidos durante un día del periodo de precampaña, también es cierto que los gastos de producción y post producción son los mismos sin importar el tiempo durante el cual sean difundidos, esto es, el gasto erogado por la producción y post producción hubiera sido el mismo aun cuando se hubiera difundido más o menos días de la precampaña.

C.2 Determinación por concepto de publicidad en la red social Facebook¹¹

Por otro lado, por lo que hace a la publicidad pautaada en la red social Facebook toda vez que el proveedor remitió la documentación soporte de los egresos erogados por dicho concepto, resulta innecesario aplicar lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, para determinar el beneficio obtenido por la publicidad contratada, ya que se cuenta con elementos que permiten tener certeza de los gastos erogados no informados a la autoridad fiscalizadora en el marco del informe correspondiente.

APARTADO D. DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SUJETOS INCOADOS

Visto lo anterior, es importante previo a la individualización de las sanciones correspondientes determinar la **responsabilidad de los sujetos incoados** en la consecución de la conducta infractora determinada en el apartado D, sub-apartado C de este Considerando.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos

¹¹ Se destaca que por lo que hace a esta determinación de la infracción, así como el monto determinado por la autoridad este ha quedado firme, toda vez que el mismo no fue recurrido mediante ningún medio de impugnación dentro de los plazos legales establecidos en la normatividad electoral.

Electoral y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los precandidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes siguientes:

- 1) Informes del gasto ordinario:
 - a. Informes trimestrales.
 - b. Informe anual.
 - c. Informes mensuales.
- 2) Informes de Proceso Electoral:
 - a. Informes de precampaña.**
 - b. Informes de obtención de apoyo ciudadano.
 - c. Informes de campaña.
- 3) Informes presupuestales:
 - a. Programa Anual de Trabajo.
 - b. Informe de Avance Físico-Financiero.
 - c. Informe de Situación Presupuestal.

Ahora bien, por lo que hace a los precandidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de campaña y precampaña. Para tales efectos se analizará de manera separada las infracciones en que incurran.”*

De lo anterior se desprende, que, no obstante que el sujeto obligado haya incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del precandidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el precandidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que, respecto a las precampañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los precandidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda interna.
- Que los precandidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de precampaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los precandidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los precandidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el precandidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los precandidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados

de la revisión de los informes de precampaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido y precandidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.

Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y precandidatos, a continuación, se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los precandidatos obligados solidarios.

El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de precampaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los precandidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el precandidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los precandidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de precampaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los precandidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de

presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación¹²:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes

¹² Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del partido no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al Partido Revolucionario Institucional pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es originalmente responsable.

APARTADO E. SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE PRECAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS PRECANDIDATOS AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2017-2018.

(...)

3. Individualización y determinación de la sanción, respecto de la omisión de reportar los gastos en el Informe de Precampaña. Una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita determinada en el **Considerando 2, apartado B**, se procede a individualizar la sanción correspondiente, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

Ahora bien, toda vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita que violenta los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de Ley General de

Partidos Políticos y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión).
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción.

CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).

Con relación a la irregularidad identificada, se concluye que el sujeto obligado omitió reportar los gastos realizados en el informe de precampaña de los ingresos y gastos

de los precandidatos de los partidos políticos correspondientes al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado consistente en no reportar gastos realizados por concepto de producción y post-producción de dos videos, así como la publicidad pagada en la red social Facebook de los mismos durante la precampaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.

Modo: El Partido Revolucionario Institucional omitió reportar en el Informe de precampaña los egresos relativos a producción y post-producción de dos videos pagados en la red social Facebook de los mismos, por un monto de **\$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.)**. De ahí que el partido contravino lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió durante el periodo de precampaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018.

Lugar: La irregularidad se actualizó en la Ciudad de México.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de violación alguna del sujeto obligado para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales

protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, y no únicamente su puesta en peligro.

En este caso, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, con lo que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia en la rendición de cuentas como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado vulneró los valores establecidos y afecta a persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos.

En este orden de ideas al omitir reportar en su informe de precampaña los egresos por concepto de producción y post-producción de dos videos, así como la publicidad pautaada en la red social Facebook de los mismos, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, mismos que a la letra señalan:

Ley General de Partidos Políticos

“Artículo 79

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:

a) Informes de precampaña:

*I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados;
(...)”*

Reglamento de Fiscalización

“Artículo 127

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.”

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de

precampaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público,

de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el Partido Revolucionario Institucional se ubica dentro de la hipótesis normativa prevista en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquellas que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.

En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración al supuesto contenido en la norma.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que, en las infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas infracciones son siempre de resultado.

En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada la conducta.

En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por la omisión de reportar el gasto por concepto producción y post-producción de dos videos y de publicidad contratada y difundida mediante la red social Facebook, es garantizar certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado infractor se traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real de los bienes jurídicos tutelados, consistente en cumplir con la obligación de reportar el gasto de los recursos que obtenga para el desarrollo de sus fines.

En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en **una falta de fondo**, cuyo objeto infractor concurre directamente en tener certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los sujetos obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta, pues el Partido Revolucionario Institucional cometió una sola irregularidad que se traduce en falta de carácter **SUSTANTIVO** o de **FONDO**, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, por lo que resulta procedente imponer una sanción.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar el gasto por concepto producción y post-producción de dos videos y de publicidad contratada y difundida mediante la red social Facebook.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos de producción y post –producción de dos videos pautados en la red social Facebook de los mismos, en el marco de la precampaña en el Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, en la Ciudad de México, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización; esto es, certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.)**.

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecue a las particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta

y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Revolucionario Institucional cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así, mediante el Acuerdo número **INE/CG339/2017** emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria de dieciocho de agosto de dos mil dieciocho, se le asignó al partido político como financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2018, un total de **\$1,094,896,674.00 (mil noventa y cuatro millones ochocientos noventa y seis mil seiscientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)**.

En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido obran dentro de los archivos de esta autoridad los registros de sanciones que han sido impuestas al partido político por la autoridad electoral, así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidos de sus ministraciones y se advierte que dicho instituto político no tiene saldos pendientes por saldar al mes de junio de dos mil dieciocho.

En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al Partido Revolucionario Institucional por la autoridad electoral, así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones:

Deducción	Ámbito	Monto total de la sanción	Montos de deducciones al mes de septiembre de 2018	Montos por saldar
CG190/2013-SEGUNDO-d)-23	FEDERAL	\$13,087,011.52	\$602,193.17	\$11,882,625.18
CG190/2013-SEGUNDO-d)-46	FEDERAL	\$1,679,293.60	\$72,993.11	\$1,533,307.38
CG190/2013-SEGUNDO-f)-55	FEDERAL	\$656,315.13	\$27,372.42	\$601,570.29
CG190/2013-SEGUNDO-f)-56	FEDERAL	\$1,479,299.01	\$63,868.97	\$1,351,561.07
CG190/2013-SEGUNDO-j)-107	FEDERAL	\$8,954,838.10	\$410,586.25	\$8,133,665.60
CG190/2013-TERCERO-c)-20-I	FEDERAL	\$16,140,773.41	\$739,055.25	\$14,662,662.91
CG190/2013-TERCERO-c)-21-I	FEDERAL	\$7,343,198.93	\$337,593.14	\$6,668,012.65
CG190/2013-TERCERO-e)-31.1-I	FEDERAL	\$1,453,060.38	\$63,868.97	\$1,325,322.44
CG190/2013-TERCERO-e)-37-I	FEDERAL	\$1,152,000.00	\$54,744.83	\$1,042,510.34
CG190/2013-TERCERO-e)-44-I	FEDERAL	\$1,363,018.99	\$63,868.97	\$1,235,281.05
CG190/2013-TERCERO-e)-46-I	FEDERAL	\$884,616.00	\$36,496.56	\$811,622.88
CG190/2013-TERCERO-e)-49-I	FEDERAL	\$9,440,589.36	\$437,958.67	\$8,564,672.02
CG190/2013-TERCERO-j)-83-I	FEDERAL	\$12,428,809.06	\$574,820.75	\$11,279,167.56
CG190/2013-TERCERO-l)-221-I	FEDERAL	\$637,675.15	\$27,372.42	\$582,930.31
CG190/2013-TERCERO-l)-223-I	FEDERAL	\$1,678,268.56	\$72,993.11	\$1,532,282.34
CG190/2013-TERCERO-l)-225-I	FEDERAL	\$1,222,257.24	\$54,744.83	\$1,112,767.58
CG190/2013-TERCERO-l)-227-I	FEDERAL	\$1,346,759.95	\$63,868.97	\$1,219,022.01
CG190/2013-TERCERO-n)-202-I	FEDERAL	\$1,184,258.99	\$54,744.83	\$1,074,769.33
CG190/2013-TERCERO-o)-216-I	FEDERAL	\$2,216,437.62	\$100,365.53	\$2,015,706.56
CG190/2013-TERCERO-p)-50.2-I	FEDERAL	\$25,187,647.32	\$1,158,765.64	\$22,870,116.04
CG242/2013-SEGUNDO-g)-92	FEDERAL	\$652,983.07	\$118,613.81	\$415,755.55
CG242/2013-SEGUNDO-g)-94	FEDERAL	\$2,702,722.17	\$501,826.70	\$1,699,068.62
INE/CG395/2017-TERCERO-y)-228 bis-I	FEDERAL	\$51,198,202.54	\$39,698,668.00	\$11,499,534.54
INE/CG260/2018-SEGUNDO-e)-2	FEDERAL	\$18,872.50	\$0.10	\$0.20
INE/CG630/2018-SEGUNDO	FEDERAL	\$1,209.00	\$1,209.00	\$0.00
SRE-PSC-148/2018-SEGUNDO	FEDERAL	\$120,900.00	\$120,900.00	\$0.00
SRE-PSC-160/2018-SEGUNDO	FEDERAL	\$80,600.00	\$80,600.00	\$0.00
SRE-PSC-193/2018-SEGUNDO	FEDERAL	\$80,600.00	\$80,600.00	\$0.00
Total:		\$164,392,217.60	\$45,620,694.00	\$113,113,934.45

De lo anterior, se advierte que al mes de septiembre de dos mil dieciocho, el Partido tiene un saldo pendiente de **\$113,113, 934.45 (ciento trece millones, ciento trece mil novecientos treinta y cuatro pesos 00/45 M.N.)**, por lo que se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:

“I. Con amonestación pública;

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;

III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;

IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y

V En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.”

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

Por lo anterior este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquella que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso.

Asimismo, la Sala Superior sostuvo en la sentencia recaída al recurso de apelación SUP-RAP-461/2012 que las faltas deben traer consigo una consecuencia suficiente para que, en lo futuro, tanto individuos que conforman la sociedad en general, como el partícipe de un ilícito, no cometan nuevos y menos las mismas violaciones a la ley, pues con ello se expondría el bienestar social, como razón última del Estado de Derecho.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del partido infractor una amonestación pública sería poco idónea para disuadir la conducta como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción prevista en la en la fracción V consistente en la cancelación del registro como partido político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente político sancionado del sistema existente.

La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencial del presente procedimiento.

En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquella que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso.

En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización),

es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso del Partido Revolucionario Institucional se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla general, que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos elementos, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en la Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-RAP-62/2008.

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso.

Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que rodean la irregularidad, llegando a la conclusión que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello como consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta de **omitir reportar el gasto** y las normas infringidas [artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización], la singularidad y el objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al **150% (ciento cincuenta por ciento)** sobre el monto involucrado, que asciende a un total de **\$30,000.00**.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al sujeto obligado, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),

fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa equivalente a **397 (trescientos noventa y siete)** Unidades de Medida y Actualización vigente para el ejercicio 2017¹³, misma que asciende a la cantidad de **\$29,969.53 (veintinueve mil novecientos sesenta y nueve pesos 53/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

4. Seguimiento en el informe de ingresos y gastos correspondiente. (...)

5. Estudio del probable rebase de tope de gastos de precampaña derivado de los gastos producción de los videos¹⁴ y la modificación correspondiente al Dictamen correspondiente identificado como INE/CG259/2018¹⁵.

En el apartado B ha quedado acreditado que existió una conducta infractora en materia de fiscalización a cargo del Partido Revolucionario Institucional que benefició la precampaña del entonces precandidato a Presidente de la República, el C. José Antonio Meade Kuribreña, el cual asciende a la cantidad de **\$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.)**, mismo que no fue reportado por el instituto político, por lo que tal cantidad deberá ser contabilizada en el tope de gastos de precampaña correspondiente al cargo de Presidente de la República, con la finalidad de determinar si hubo rebase al tope de gasto de precampaña establecidos y con ello, determinar si se contravino lo dispuesto en el artículo 443, numeral 1, inciso c), en relación al 229 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

A continuación, se desglosa el monto obtenido de las consideraciones que preceden al presente apartado:

¹³ De acuerdo con la Jurisprudencia 10/2018 emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

¹⁴ Es importante mencionar que únicamente se contempla el gasto por la producción de los dos videos puesto que el gasto por la publicidad en Facebook, se acreditó previo a la determinación final de los gastos dictaminados por la autoridad fiscalizadora.

¹⁵ Dictamen modificado mediante el acuerdo INE/CG497/2018 por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Superior recaída en el expediente SUP-RAP-57/2018.

Irregularidad	Concepto	Precandidato beneficiado	Cantidad no reportada
Egreso no reportado	Producción de dos videos	José Antonio Meade Kuribreña	\$20,000.00

Expuesto lo anterior, debe sumarse el beneficio obtenido al total de gastos efectuados por el precandidato a presidente de la República del Partido Revolucionario Institucional, quedando de la siguiente forma:

Monto de gastos determinados al Precandidato a Presidente de la República del PRI ¹⁶ (A)	Monto a acumular (B)	Total de gastos determinados por lo que hace al PRI C=A+B
\$21,888,088.34	\$20,000.00	\$21,908,088.34

Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo **INE/CG505/2017** aprobado por este Consejo General en sesión ordinaria celebrada el treinta de octubre de dos mil diecisiete se fijó como tope máximo de gastos de precampaña para la elección de Presidente de la República para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, la cantidad de **\$67,222,417.00** (sesenta y siete millones, doscientos veintidós mil, cuatrocientos diecisiete pesos 00/100 M.N.).

Adicionalmente, se precisa que el C. José Antonio Meade Kuribreña, también fungió como precandidato a la Presidencia de la República por los partidos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, por lo que se procede actualizar la totalidad de gastos determinados al entonces precandidato de referencia, como se detalla a continuación:

Precandidato y cargo beneficiado	Partido que postula	Monto de gastos por partido	Total de gasto determinado (A)	Tope de Gastos de Precampaña (B)	Diferencia C=B-A
José Antonio Meade Kuribreña	PRI	\$21,908,088.34	\$28,246,299.69	\$67,222,417.00	\$38,976,117.31
	PVEM	\$1,110,775.04			

¹⁶ Se precisa que el monto total de gastos se toma de la Resolución INE/CG639/2018 (página 76), en la que al resolverse el Procedimiento Administrativo Sancionador con número de expediente INE/Q-COF-UTF/15/2018, se actualizó el monto de gastos realizados por el entonces precandidato.

Precandidato y cargo beneficiado	Partido que postula	Monto de gastos por partido	Total de gasto determinado (A)	Tope de Gastos de Precampaña (B)	Diferencia C=B-A
Presidente de la República.	NUAL	\$5,227,436.31			

En este sentido, de lo descrito en la tabla anterior, se desprende que el gasto realizado no rebasó el tope de gastos de precampaña establecidos como tope máximo para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.

En consecuencia, por lo que hace a una posible irregularidad en rebase de topes de gastos de precampaña, esta autoridad electoral concluye fehacientemente que el entonces precandidato se ajustó a los límites máximos establecidos por la autoridad electoral.

(...)"

7. Que, de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el presente Acuerdo, se modifica la parte resolutive en los términos siguientes:

“R E S U E L V E

“(...)”

SEGUNDO. Se declara **fundado** el procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Revolucionario Institucional, en los términos del **Considerando 2, Apartado B.**

TERCERO. Se impone al Partido Revolucionario Institucional una multa equivalente a **397 (trescientos noventa y siete)** Unidades de Medida y Actualización vigente para el ejercicio 2017, misma que asciende a la cantidad de **\$29,969.53 (veintinueve mil novecientos sesenta y nueve pesos 53/100 M.N.)** en los términos de la parte final del Considerando 3.

CUARTO. (...).

OCTAVO. Se computa al tope de gastos de precampaña la cantidad de **\$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.)**, en términos del Considerando 5.

(...)"

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y aa) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

A C U E R D A

PRIMERO. Se modifica la parte conducente de la Resolución **INE/CG184/2018**, aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, relativa al procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Revolucionario Institucional, y su precandidato a Presidente de la República, el C. José Antonio Meade Kuribreña, identificado como **INE/Q-COF-UTF/11/2018**, en los términos precisados en los Considerandos **6 y 7** del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se modifica el Dictamen Consolidado correspondiente a los Informes de ingresos y gastos de precampaña correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, con clave INE/CG259/2018, por lo que hace al Partido Revolucionario Institucional, y su entonces candidato al Presidente de la República, C. José Antonio Meade Kuribreña, en los términos precisados en el Considerando **6** del presente Acuerdo.

TERCERO. Infórmese a la **Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SUP-RAP-77/2018**, remitiéndole para ello las constancias atinentes.

CUARTO. Notifíquese a los interesados.

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo._____

Pasamos ahora al apartado 9.35._____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín._____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:

Muchas gracias, Consejero Presidente._____

En este caso, en lo general estoy a favor del Proyecto de Acuerdo, me parece que cumple con lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara, que ordenó que de inmediato se resolviera este acatamiento y ello se está realizando mediante este Proyecto de Acuerdo, por lo que hace a la conclusión a la que llega el Proyecto de Acuerdo en el sentido de declarar infundado el procedimiento, también estoy de acuerdo en lo general, en una parte de los conceptos denunciados, están registrados en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), mientras otros no, pero en este caso no se tienen elementos suficientes para poder tener acreditados los gastos, sin embargo, no comparto la valoración que se hace tanto con motivo del Sistema Integral de Fiscalización (SIF), el uso que se hace del Sistema Integral de Fiscalización (SIF), lo relativo al Cardex y principalmente en este caso estoy en contra del apartado A relativo a los actos anticipados, me parece que no tenemos que esperar como se ha señalado en muchas ocasiones a que el Organismo Público Local se pronuncie para efectos de que se pronuncie esta autoridad._____

Por lo que aquí pediría una votación en lo general y otra en lo particular, en lo particular por lo que hace a la revisión del Cardex, al uso del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) y a los actos anticipados._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín._____

Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación por favor.____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Entonces les propondría a ustedes 2 votaciones, una en lo general y otra en lo particular para considerar lo que se refiere al Cardex, al uso del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) y a los actos anticipados._____

Señoras y señores Consejeros Electorales se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 9.35, en esta votación en lo general excluyendo lo que ya mencioné previamente._____

Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo._____

Aprobado en lo general por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello; no estando presentes durante la votación los Consejeros Electorales, Doctor Benito Nacif Hernández y Maestra Dania Paola Ravel Cuevas)._____

Ahora someto a su consideración en lo particular, por lo que al Cardex, al uso del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) y a los actos anticipados tal y como viene en el Proyecto de Acuerdo._____

Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables._____

7 votos._____

¿En contra?_____

2 votos._____

Aprobado en lo particular por 7 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles; no estando presentes durante la votación los Consejeros Electorales, Doctor Benito Nacif Hernández y Maestra Dania Paola Ravel Cuevas), Consejero Presidente._____

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG1297/2018) Ptos. 9.35_____

INE/CG1297/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, CON SEDE EN GUADALAJARA, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO SG-RAP-257-2018, RELACIONADO CON EL EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL

VISTO para resolver el expediente **INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL**.

A N T E C E D E N T E S

I. Escrito de queja. El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización, el oficio INE-UTF-JAL-0195-2018, mediante el cual el Enlace de Fiscalización en el estado de Jalisco, remitió el escrito de queja presentado por la C. María del Rosario Copado Anzaldo, otrora candidata a la Presidencia Municipal de Villa Corona, Jalisco, postulada por el partido político Movimiento Ciudadano, en contra del C. Luis René Ruelas Ortega, otrora candidato independiente a la Presidencia Municipal de Villa Corona, en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Jalisco; denunciando hechos que se considera podrían constituir infracciones a la normativa electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos por diversos eventos de los cuales se originaron presuntos gastos no reportados, consistentes en: estandartes, banderas, camisas, pinta de bardas, saludadores, renta de inmuebles para eventos, lámpara, alimentos, gorras, vehículo, combustible, playeras, arreglos florales, mesas, manteles, escenario, sonido, vasos desechables, refrescos, sillas, mantas, bocinas, tripie, logotipo (con una manita y con el nombre del denunciado), lo anterior en beneficio de la campaña de los sujetos obligados denunciados. (Fojas de la 1 a la 179)

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados

y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja:

“ (...)”

HECHOS

1. Topes de gastos de campaña. El 30 de diciembre de 2017, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC Jalisco), mediante Acuerdo IEPC-ACG-156/2017, aprobó los montos de los topes de gastos de campaña de los candidatos de partido e independientes, relativos al Proceso Electoral Concurrente 2017-2018, del que se desprende, que para el caso de Villa Corona, Jalisco, el tope de gastos de campaña por candidatura a munícipes se determinó en **\$75,490.00 MN¹** (ANEXO 2).

2. Candidatura. El 20 de abril de 2018, mediante el acuerdo IEPC-ACG-081 /2018, el Consejo General del IEPC Jalisco resolvió entre otras, sobre la procedencia de la solicitud de registro del candidato a Munícipe en Villa Corona, Jalisco, Luis René Ruelas Ortega (candidato denunciado), postulado como candidato independiente.

3. Actos anticipados de campaña. El candidato independiente Luis René Ruelas Ortega “René Ruelas”, realizó diversos actos anticipados de campaña, los cuales difundió a través de su página web de internet, la así llamada Facebook, en las que alternaba su participación el Proceso Electoral, como miembro de una asociación civil, con trabajo social y servicio a la sociedad, denominada Villa Corona Antigua, y al mismo tiempo promovía su imagen y su participación primero como aspirante a candidato independiente (durante la etapa de recepción de apoyo ciudadano) y posteriormente como candidato independiente, en la etapa de campaña. Esta circunstancia puede demostrarse con algunas evidencias, como es el caso de las publicaciones difundidas por el candidato independiente de Villa Corona, al gobierno municipal, en las fechas 8, 13 y 18 de marzo, 01, 11, 21 y 22 de abril, todos del 2018, las cuales versan sobre diversos eventos, entre los que destaca un concurso de elaboración de papalotes que incluía premios en efectivo a los participantes, así como el reconocimiento a mujeres destacadas de Villa Corona, y que Presidente interino en ese momento, organizó como acto del municipio, pero en la publicación René Ruelas aparece como anfitrión. Estas actividades de simulación de actos de beneficencia pública en realidad constituían actos anticipados de campaña, porque los intercalaba en su misma página con su mismo nombre con la difusión de su candidatura independiente, justo dentro de los periodos para recabar y comprobar el apoyo ciudadano alterando sustancialmente las condiciones de equidad a que deben sujetarse todos los aspirantes, precandidatos y candidatos en el Proceso Electoral; esta circunstancia tal como se acreditará, constituyó una inequidad electoral y ventajosa, con relación al resto de los candidatos, según se mostrará adelante, a través de las certificaciones de información difundida en las redes sociales y (URL, links y hashtag) del candidato infractor. (ANEXO 3).

4. Campañas políticas. El 29 de abril de 2018, iniciaron las campañas electorales de los candidatos a Munícipes en Villa Corona, Jalisco, las cuales, terminaron el 27 de junio de 2018, en términos del Calendario Integral del Proceso Electoral Concurrente 2017-2018 aprobado por el IEPC Jalisco aprobado el 31 de agosto de 2017, mediante el acuerdo IEPC-ACG-086/2017. (ANEXO 1).

5. Actos de campaña, no reportado previamente conforme a la agenda de eventos políticos del INE, para efectos de que la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) estuviera en situación

¹ Consultable en la liga electrónica: <http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2017-12-30/p6iepc-acg-155-2017.pdf>

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL**

de validar su realización conforme a derecho;² esta omisión concatenada con **otros factores evidencian una actuación dolosa** por parte del candidato independiente a la presidencia municipal de Villa Corona, Jalisco, Luis René Ruelas Ortega “René Ruelas”, en el desarrollo de la contienda electoral. El primero de ellos se refiere a actos de campaña no agendados por el aludido candidato, referente a los días del 29 de abril al 8 de mayo del presente año 2018. El segundo elemento se puede apreciar de las publicaciones ejecutadas por el propio candidato a través de su página de facebook, de la actividad realizada respecto a los días que dejó señalados en líneas que anteceden. Los elementos aquí expuestos, se probarán más adelante. (ANEXO 1 Y 3).

6. Reporte de gastos. Al 27 de junio de 2018, y contrario a su obligación de reportar sus ingresos y egresos de campaña, el candidato denunciado ha sido omiso en cumplir con dicha obligación, tal como le exige el artículo 79, numeral 1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) en concordancia con los similares 17; y, 38, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) según se desprende del “detalle de operaciones, ingresos y gasto reportado”, generado por el sistema de Rendición de Cuentas de los Actores Políticos del INE, como se detalla a continuación:

PROCESO LOCAL ORDINARIO 2017-2018, PERIODO 1 ETAPA DE CORRECCIÓN; FORMATO “IC” INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, DEL 29 DE ABRIL 2018 AL 27 DE JUNIO 2018, LUIS RENE RUELAS ORTEGA, CANDIDATO INDEPENDIENTE, VILLA CORONA, JALISCO, AL 22 DE JUNIO DE 2018>				
Siglas	Nombre Completo	Total de Operaciones	Ingresos	Gastos
INDEPENDIENTE	LUIS RENE RUELAS ORTEGA	12	\$26,000.00	\$16,837.40
Fuente: http://www.ine.mx/rendicion-cuentas/ consultada el 5 de julio de 2018				

(ANEXO 2).

7. Gastos no reportados. Todos los gastos ejecutados por el candidato independiente de Villa Corona, los cuales empezó a realizar desde que manifestó su intención a participar como contendiente independiente a la presidencia municipal, durante el periodo de recolección de firmas y durante la campaña.

Para la pretensión de la certificación y correspondiente fiscalización de los gastos y actos ya sean anticipados o durante la campaña realizados por cuenta o mandato del candidato independiente a la presidencia municipal de Villa Corona, Jalisco, **C. Luis René Ruelas Ortega “Rene Ruelas”**, me permito puntualizar varios elementos que así abonan mi argumento, primeramente, el referido candidato se dio a conocer por un logo de una manita así como de su nombre, junto con lo anterior la inserción de pinturas de diversas imágenes en forma de mural, de diversos colores, figuras de templo, mariposas, angelitos, niños, personas trabajando, etc., en bardas de las diversas delegaciones así como de la cabecera municipal de Villa Corona, las cuales jamás reportó como cuenta de gastos, según **FORMATO “IC”-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS**, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización) dichas imágenes y videos a través de los diferentes link o URL, hashtag, las iré agregando al presente, para mejor comprensión y apreciación de la conducta irregular, reprochable, que desplegó el candidato independiente a la presidencia municipal de Villa Corona, **C. Luis René Ruelas Ortega “Rene Ruelas”**, comprobables según se podrá apreciar de los anexos (ANEXOS 1, 2, 3, 4, 5).

²https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=e1s5

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL**

A través del siguiente bloque, me permito pormenorizar todas las actividades señaladas en los hechos de la presente denuncia, consistentes en actos anticipados de campaña, actividades no agendadas y los gastos no reportados, con el fin de dar una claridad y amplitud periférica de la cantidad de infracciones en que incurrió el denunciado Luis René Ruelas Ortega.

ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA

Consistentes en actos y actividades que a continuación se relacionan y describen cronológicamente como constitutivos. Esta información aparece en la página personal del C. Luis René Ruelas Ortega, dentro de la página web de redes sociales denominada Facebook:

Fecha 2018	Título / actividad	Texto e imágenes
	<p>Imagen</p> <p>Pasos para ingresar a la página de transparencia del SAT que aquí se muestra:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ingresas a la página -ingresa RFC y contraseña - Menú (lado izq.) -Donatarias y donaciones -Donatarias -transparencia -Información general donde te indica sí; -Pag azul (donataria autorizada) -Consulta a la ciudadanía de las donatarias autorizadas) -Último Eje 2017 -Nombre de la Asco -RFC (si lo sabe) (si está en azul si la presentaron) (si está en rojo no la presentaron) 	<p>Para formar una idea clara de los argumentos que en el curso del presente se desprenden, es preciso, que esta H. Autoridad en materia electoral, tenga en primer término conocimiento de la conducta fraudulenta que desarrolla el C. Luis René Ruelas Ortega "René Ruelas" a la presidencia municipal de Villa Corona, Jal, en contra de la Secretaría de Administración Tributaria, en torno a la declaración de impuestos, al mismo INE, por las falsas declaraciones según FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización).</p> <p>Pues la imagen capturada de la página oficial del SAT, señala que ante esa dependencia pública no existe la asociación civil Villa Corona Antigua, asociación mediante la cual el referido candidato independiente se cobijó para llevar actos anticipados de campaña, así mismo estuvo percibiendo donativos para impulsar gastos de su campaña política, en el desarrollo del Proceso Electoral 2017-2018, en Villa Corona, Jalisco. Aquí preciso señalar las diferentes ligas de dónde y cómo se obtuvo la imagen expuesta.</p> <p>https://www.sat.gob.mx/tramites/operacion/70109/presenta-la-obligacion-de-transparencia-de-las-donatarias-autorizadas</p> <p>https://www.informador.mx/Cultura/Tradicion-viva-en-Villa-Corona-20170406-0064.html</p>
	Imagen	
08 mar 18	Imagen	

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL

08 mar 18	Imágenes	<p>Aquí se deja expuesta la invitación, referente al Reconocimiento a mujeres en el municipio. Así mismo se aprecia de la invitación, que llevará como invitados especiales a una conductora de radio de nombre Gema del Toro, a una cantante de música ranchera Paloma del Río y así como a una MISS Mw México 2017 de nombre Goretti Robles, lo cual se traduce en un gasto excesivo al tope de campaña, así como presión sobre el electorado</p> <p>En la invitación el gobierno municipal y la asociación civil (apócrifa) aparecen como organizadores y convocantes Villa Corona Antigua (Asociación Civil apócrifa, de la cual el referido candidato es miembro y aparece como administrador de la página de dicha asociación,) y el gobierno municipal de Villa Corona.</p> <p>Día de la mujer: el 10 diez de marzo de 2018, Evento en el marco del Día de la Mujer, llevado a cabo en el Auditorio Municipal de Villa Corona, Jalisco, el C. LUÍS RENÉ RUELAS ORTEGA participa como "invitado de honor" y hace entrega de reconocimientos a mujeres destacadas del Municipio, acto difundido y publicitado mediante la página de Facebook "El Diario Regional", publicación en la que se etiqueta a la misma página de Facebook "Villa Corona Antigua" como el patrocinador del evento. Evento publicado y promocionado con varias fotografías con fecha 10 y 11 de marzo de 2018 en el muro de la red social Facebook "Rene Ruelas".</p> <p>https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215263208509198&set=gm.162058914545467&type=3&theater&ifg=1 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215290910721736&set=pb.1103967893.-2207520000.1531178774.&type=3&theater https://www.facebook.com/groups/840021686082531/?ref=br_rs https://www.facebook.com/luisitin88</p>
08 mar 18	Imágenes	<p>Presentación de equipo de trabajo – planilla de la candidatura independiente, para la presidencia municipal de Villa Corona, Jalisco.</p> <p>El día 07 siete de marzo 2018, lleva a cabo la presentación de la planilla de candidatos a municipales al Ayuntamiento de Villa Corona, Jalisco, para el Proceso Electoral 2018. A través de sus redes sociales.</p> <p>"Un equipo multidisciplinario con la única finalidad de servir, donde sus objetivos e ideales son compartidos, así como la integridad y la unión por un bien común. Personalidades distintas unidas por la misma misión.</p> <p><u>#somosindependientes</u> <u>#yo #soy</u> <u>#independientes</u>"</p> <p>"Servicio, Capacidad, Responsabilidad, Honestidad, Amor por nuestro Municipio y sus comunidades."</p> <p>"La Representatividad y participación de nuestras agencias, delegaciones y la cabecera Municipal son muy importantes porque en conjunto somos uno mismo."</p> <p><u>#NuestraplanillaIndependiente</u>"</p> <p>"La Representatividad y participación de nuestras agencias, delegaciones y la cabecera Municipal son muy importantes y en conjunto <u>#Somos1mismo</u>, la comunicación, el diálogo, el enlace y la inclusión, así como su participación y apoyo son vitales para trascender y poder llegar.</p> <p><u>#Somos1propuestaDiferente</u>"</p> <p>"Trabajando por el bienestar para nuestra Gente.</p> <p><u>#SefuertepiensaClaroseIndependiente</u>"</p>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL

		<p><i>El candidato expone:</i></p> <p><i>"Les presento a las 13 personas honestas, trabajadoras, honorables, responsables, pero sobre todo que aman a su municipio y sus comunidades que me acompañan en este proyecto. Al hablar con cada uno de ellos y el ver que tenemos los mismos objetivos e ideales me confirma que vamos por el camino correcto. Pronto ya está por iniciar la campaña nosotros somos respetuosos de los tiempos por lo que hasta el 29 de abril iniciaremos actividades. #Yosoyindependiente!! Solo puedo decir que es un EQUIPAZO."</i></p>
13 mar 18	Imágenes	<p><i>Avances en el registro como candidato independiente ante el IEPC: René Ruelas</i></p> <p><i>Me gusta esta página · 13 de marzo ·</i></p> <p><i>"Contento de la notificación del IEPC en el cual nos indican que cumplimos con las firmas y la dispersión por lo cual podemos seguir en el proceso del registro de este proyecto histórico. ¡Esto es gracias al apoyo de todos!"</i></p> <p><i>El 25 de marzo de 2018 se presenta como aspirante independiente a la Presidencia Municipal de Villa Corona, Jalisco, para el proceso de 2018.</i></p> <p><i>"Les comparto que nos acabamos de registrar ante el IEPC por la vía independiente, vamos paso a paso con el objetivo bien definido, el trabajar por el desarrollo de todas nuestras comunidades. Gracias a los que han confiado desde un inicio en nosotros y a los que dudaban les estamos demostrando que este proyecto es algo real. Piensa independiente !!!!"</i></p>
18 mar 18	Imágenes	<p><i>Entrevista en la que convoca a una actividad religiosa en semana santa en Villa Corona; en dicha actividad manifiesta realizar gastos para la misma y se ostenta como organizador de la misma. : El 26 de marzo del corriente, el video subido al muro de Canal 21 de Facebook, del Programa Edición 21 Mesa de Análisis, conducido por Alejandro de los Santos, de fecha 18 dieciocho de marzo de 2018 dos mil dieciocho a las 11:30 once horas con treinta minutos, se encuentra la entrevista al C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA con una duración de 17 diecisiete minutos con 47 cuarenta y siete segundos, en el que es entrevistado y habló del viernes de dolores, en el que se llevará a cabo el evento Altares de Dolores o Incendio de Dolores, a realizarse el viernes 26 veintiséis de marzo de 2018 dos mil dieciocho a las 18:00 dieciocho horas, en Villa Corona, Jalisco, nuevamente organizado por la Asociación Villa Corona Antigua, informando de un desfile público. Comenta su participación en el evento señalado en el párrafo anterior. Mismo evento es promocionado en su muro personal de la red social Facebook de nombre "René Ruelas" con fecha de 22 veintidós de marzo a las 11:03 once horas con tres minutos. Además de la publicidad que realiza el conductor del Programa el C. ALEJANDRO DE LOS SANTOS en su muro personal de la red social Facebook.</i></p> <p><i>Altares en celebraciones religiosas de semana santa en Villa Corona. Viernes de dolores</i></p> <p><i>https://www.facebook.com/canal21jalisco/videos/2002608263321466/</i></p>

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL**

13 mar 18	Imágenes	<p>El candidato Independiente a la alcaldía de Villa Corona. Jal., C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS", en su carácter de socio activo de la asociación civil denominada Villa Corona antigua (apócrifa) así como siendo administrador del perfil de Facebook denominado como Villa Corona antigua, publica una invitación a la quema de judas Iscariote", la cual sería llevada a cabo a las 9:30 p.m. del mismo día.,</p> <p>https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215314647835149&set=gm.1628026793948679&type=3&theater&ifg=1</p> <p>https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215477178458313&set=gm.1646172222134136&type=3&theater&ifg=1</p>
01 abr 18	Imágenes	<p>De estas imágenes se advierte actos anticipados de campaña, así como gastos no reportados en la agenda del INE lo cual realiza bajo la sombra de la asociación civil Villa Corona antigua (la cual es apócrifa), de la cual dice que es socio activo. Promocionales de Villa Corona Antigua.</p> <p>Con fecha de 1 (Primero) de abril del corriente, a las 10:30 de la mañana, en su página personal de la red social Facebook "René Reparto de objetos promocionales de "Villa Corona Antigua": en la página con esa fecha se rubrica: <u>Alejandro de los Santos</u> agregó 2 fotos nuevas.</p> <p><u>1 de abril a las 14:39</u> ·</p> <p>"Gracias a los amigos de Villa Corona <u>René Ruelas</u> recuperando tradiciones de este municipio <u>#VillaCoronaAntigua</u>"</p> <p>Inserta las siguientes imágenes:</p> <p>Imagen Imagen</p>
11 abr 18	Imágenes	<p>De la imagen que aquí se muestra claramente se puede evidenciar como el candidato independiente a la alcaldía de Villa Corona, Jal., realiza actos anticipados de campaña, así mismo efectúa gastos de operación, ejerciendo presión sobre el electorado al invitarlos a un evento "social" referente al día del papalote, para el día 22 de abril a partir de las 12:00 pm en las cancha de usos múltiples en la delegación de Juan Gil Preciado Mpio de Villa Corona, Jal., de la convocatoria que muestra la citada imagen el referido candidato señala que otorgara 3 estímulos económicos primer lugar tres mil pesos, segundo lugar dos mil y el tercer lugar mil, a los mejores papalotes</p> <p>https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215601854535137&set=gm.1660852927332732&type=3&theater&ifg=1</p> <p>Esta misma invitación al evento del papalote, el C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS", la hace a través de la difusión del canal local de televisión, canal 21, que se trasmite en Zocoalco de Torres</p> <p>En este concurso se ofrece dinero en premios: en su calidad de asociación civil. El domingo 15 quince de abril del corriente, nuevamente a través de "Canal Veintiuno" en la página social de Facebook de este canal en una transmisión en vivo de streaming, es entrevistado por el mismo conductor ALEJANDRO DE LOS SANTOS, ahora haciendo promoción de un evento de Concurso de Papalotes en una comunidad del Municipio de Villa Corona, Jalisco el próximo domingo 22 de abril de este mismo año, evento nuevamente organizado por la agrupación Villa Corona Antigua. Dicha entrevista no está disponible en la página de Facebook de Canal Veintiuno.</p>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL

		<p>Entrevista para convocar a un concurso de papalotes el 22 de abril de 2018. Al minuto 2:15 del video se expresa que es una invitación al concurso en donde aparece el</p> <p>https://www.facebook.com/canal21jalisco/videos/2015339565381669/UzpfSTq0MDAyMTY4NiA4MjUzMToxNiY1OTU0NjA2ODIvNTY0/</p>
21 abr 18	Imagen	<p>Un día antes del concurso del papalote, intercala mensajes políticos como candidato independiente al municipio de Villa Corona Jalisco en 2018</p> <p>Los comentarios de las gráficas enfatizan la participación como candidatura independiente que se promueve a través de actividades sociales en las que se entrega dinero y otras dádivas a los participantes.</p> <p>René Ruelas está con Liz Martínez y 15 personas más. 21 de abril a las 20:59 · Villa Corona ·</p> <p>Nos estamos preparando!!!</p> <p>#Piensaindependiente. anny Ocampo #YoSoyIndependiente Administrar Me gusta · Responder · 2 d</p> <p>Ramy Evenecer #YoSoyIndependiente Administrar Me gusta Responder · 2 d</p> <p>Olga Castillo #YoSoyIndependiente Administrar Me gusta Responder · 2 d</p> <p>Luis Aguilera #YoSoyIndependiente Administrar Me gusta Responder · 2 d</p> <p>Chely Ponce #YoSoyIndependiente Administrar Me gustaMostrar más reacciones Responder · 2 d</p> <p>Octavio Lara #Yosoyindependiente Administrar Me gustaMostrar más reacciones Responder · 2 d</p> <p>Bomberito Camacho Lopez#YosoyIndipendiente Administrar Me gustaMostrar más reacciones Responder · 2 d</p> <p>Cipactli Rodríguez Pérez#YoSoyIndependiente Administrar Me gustaMostrar más reacciones Responder · 2 d</p>

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL**

		Rosalia Ibarra #YoSoyIndependiente Administrar Me gusta Mostrar más reacciones Responder · 2 d
22 abr 18	Imágenes	<p>Aquí se deja un video a través del cual el candidato independiente al municipio de Villa Corona, Jal., C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS", ejecuta un pago a una menor de edad con respecto a su participación en el evento del día del papalote celebrado el día 22 de abril del año en curso, del cual se puede apreciar que en el minuto 1:40 del video de cuenta, entrega un folder o carpeta color beige a una menor de edad, que contiene en su interior varios billetes de denominación de 200 pesos mexicanos. En la fecha en que el citado candidato, subió el referido video a su página o cuenta de Facebook del perfil de Villa Corona antigua, lo realizó fuera de los tiempos de campaña por consiguiente se considera que realizó actos anticipados de campaña y presión al electoral al influir emocionalmente de su mente a través de un premio en dinero. Aunado a eso el evento lo hace bajo la sombra asociación civil denominada Villa Corona Antigua (la cual es apócrifa)</p> <p>https://www.facebook.com/luisitin88/videos/10215689451525007/ https://www.facebook.com/100004814614837/videos/698334493670365/</p> <p>Concurso de papalotes con entrega de dinero a manera de premios a los participantes ganadores. Ramy Evenecer, (emotición) se siente agradecido con René Ruelas y 14 personas más. 22 de abril a las 20:22 ·</p> <p>FELICIDADES A NUESTROS GANADORES</p> <p>#PRIMERLUGAR FAMILIA CRUZ CAMACHO</p> <p>#SEGUNDOLUGAR FAMILIA VELAZQUEZ SALINAS</p> <p>#TERCERLUGAR SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO 8 ESTIPAC</p> <p>#GRACIASVILLACORONAANTIGUA</p>

ACTOS DE CAMPAÑA NO AGENDADOS ANTE EL INE, QUE SE TRADUCEN EN GASTOS NO REPORTADOS POR EL CANDIDATO EL C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS", conforme a la agenda de eventos políticos omitiendo los Lineamientos del FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización) de la campaña dentro del Proceso Electoral 2017—2018 dentro del ámbito local en específico Villa Corona, Jal., emitida por el INE

Fecha	Gráfico	Texto y vínculo web
29 abr 18	Imagen	<p>El 29 de abril, a las 0:12 horas, el candidato independiente a la alcaldía de Villa Corona, C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS", publicó en su página de Facebook, una imagen de Él, su logo y su nombre, donde señala lo siguiente: "INICIO DE CAMPAÑA DOMINGO 29 DE ABRIL DEL 2018 1:00 COLONIA OBRERA, ESTIPAC". HAGO NOTAR QUE EL EVENTO ANUNCIADO A REALIZAR, NO FUE REGISTRADO conforme a FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y</p>

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL**

		<p>DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización).</p> <p>https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31510835_2107300886213074_8786082793470820352_n.jpg?_nc_cat=0&oh=3262f2e23431f14a669f0f85cbdd3434&oe=5BD3322B</p> <p>#Vamosareemplazarles #Piensaindependiente</p> <p>#Hagamosquesucedanlasbuenasnoticias</p>
30 abr 18	Imagen	<p>El 30 de Abril, en varios horarios señalo dos 0:00 y 12:43, el candidato a la alcaldía de Villa Corona, C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS"; a través de su página de Facebook, realiza una publicación referente a su arranque de campaña, de la cual se pueden apreciar varios elementos, consistentes 24 estandartes, 11 banderas, 28, camisas y 24 gorras, llevado a cabo en la delegación de Estipac, del Mpio de Villa Corona, Jal. A 28 km de distancia ida y vuelta en donde por lo menos debió de usar un vehículo para trasladarse y del cual debió de presentar un contrato de comodato y erogo un gasto de gasolina de lo cual debe de presentar la factura de esta con el proveedor autorizado ante el INE en tiempo y forma., de la publicación se aprecia la siguiente frase "Excelente arranque de campaña. ¡La Colonia Obrera es Independiente!!!", actividad proselitista y utensilios de propaganda, no registrados y reportados conforme a la agenda de eventos políticos del INE atraes de su FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización).</p> <p>https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31488228_2107790156164147_3522536098037235712_n.jpg?_nc_cat=0&oh=d7b8cd8f160777d1f036d6113e4a738d&oe=5BD5CCDD</p>
01 may 18	Imagen	<p>De la publicación que realiza el C. Luis Rene Ruelas Ortega "Rene Ruelas" se puede apreciar en la publicación que realiza respecto a su imagen de perfil político del cual podemos destacar el logo que lo distingue que es una manita y su apellido "Ruelas", así mismo dejo establecido que el día de referencia no fue agendada ante el INE PARA EL DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD PROSELITISTA CONFORME A LA AGENDA DE EVENTOS POLITICOS DE LA CUAL SE DEJA AQUÍ SU LIGA</p> <p>https://SIFine.mx/SIF_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=e1s5</p> <p>Más de su logo y nombre dicho personaje político se da a conocer por la pinta de murales en bardas de las diversas calles en las delegaciones y en la cabecera municipal de Villa Corona, Jal. Violando flagrantemente las reglas del INE, a través de su FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización)</p> <p>https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31713345_10215766296326079_1568249978910932992_n.jpg?_nc_cat=0&oh=e0afcc4cf1d8ce3f9cf01e486b4f9795&oe=5BA289AB</p>
	Imagen	<p>Para la pretensión de la certificación y correspondiente fiscalización de los gastos y actos ya sean anticipados o durante la campaña realizados por cuenta o mandato del candidato independiente a la alcaldía de Villa Corona,</p>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL

		<p>Jalisco, C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA “RENE RUELAS”, me permito puntualizar varios elementos que así abonan mi argumento, cito primeramente, que el referido candidato se dio a conocer por un logo de una manita así como de su nombre, junto con lo anterior la inserción de pinturas de diversas imágenes en forma de mural, tales como a las de diversos colores, mariposas, personas, etc., en bardas de las diversas delegaciones así como de la cabecera municipal de Villa Corona, las cuales jamás reportó como cuenta de gastos, según FORMATO “IC”-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización). Dichas imágenes las iré agregando al presente, para mejor comprensión y apreciación de la conducta irregular, reprochable, que desplegó el candidato independiente a la alcaldía de Villa Corona, C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA “RENE RUELAS”.</p> <p>De la publicación que realiza el C. Luis Rene Ruelas Ortega “Rene Ruelas” a más de su logo y nombre dicho personaje político se da a conocer por la pinta de murales en bardas de las diversas calles en las delegaciones y en la cabecera municipal de Villa Corona, Jal. Violando flagrante mente las reglas del INE, a través de su FORMATO “IC”-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización)</p> <p>https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31720786_2108812589395237_6883627162851606528_n.jpg?nc_cat=0&oh=9dddfc21659dbca948b2ccee616fd5d2&oe=5BE4149E</p> <p>https://www.facebook.com/luisitin88?ref=br_rs</p>
	Imagen	<p>En la imagen que aquí se muestra, se aprecian al menos 12 estandartes, con el logo (de una manita) que identifica al C. Luis Rene Ruelas Ortega “Rene Ruelas” Violando flagrante mente las reglas del INE, a través de su FORMATO “IC”-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización)</p> <p>https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31720786_2108812589395237_6883627162851606528_n.jpg?nc_cat=0&oh=9dddfc21659dbca948b2ccee616fd5d2&oe=5BE4149E</p>
04 may 18		<p>El día 4 de mayo de 2018, no agenda actividad alguna, lo cual resulta ser violatorio de los Lineamientos emitidos por el INE. Por consiguiente al no ser registrado dicha actividad y gasto Conforme al FORMATO “IC”-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización), la conducta del candidato es oscura, dolosa y en desventaja ya que es una actividad no registrada, es dolosa, ya que realiza actividades que no agenda conforme a los Lineamientos del INE conforme a FORMATO “IC”-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización).</p>
05 may 18	Imagen	<p>El día 5 de mayo de 2018, a las 17:33, el candidato independiente a la alcaldía de Villa Corona, Jalisco, C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA “RENE RUELAS”, subió a su cuenta de Facebook, actos proselitistas, de comunidad la cual no se describe, de la cual aquí se dejan fotografías, así como direcciones URL, de las cuales se desprende el uso de camisas</p>

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL**

		<p>con el logo del citado candidato, así como un tipo de saludos en forma de manita. Esta conducta del citado candidato, genera en relación al resto de los competidores, una competencia desleal, ya que genera actividades y gastos que no reporta conforme a FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización). En donde se advierte un aproximado de 12 estandartes, 10 playeras, y un aproximado de 6 cachuchas, y que se llevó a cabo en la delegación de Atotonilco Mpio. De Villa Corona, Jal. Que se encuentra a 22 Km de distancia ida y vuelta, en donde para trasladarse debió usar un automóvil del cual debe o debió registrar en sus gastos y contener un contrato de comodato y una factura de gasolina con los proveedores autorizados por el INE</p> <p>https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215802737917096&set=a.3834751462987.2167626.1103967893&type=3</p>
06 may 18	Imagen	<p>El día 6 de mayo de 2018, a las 12:24 horas, el candidato independiente a la alcaldía de Villa Corona, Jalisco, C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS", subió a su cuenta de Facebook, actos proselitistas, de la visita que realizó a la comunidad El Barro, la cual no se encuentra registrada en la agenda conforme a FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización). De esto se advierte que dolosamente el referido candidato, realiza actividades de competencia desleal respecto del resto de los competidores, eroga gastos que oculta al INE, como bien lo dejó descrito en el presente a través de los diversos link y hashtag.</p> <p>René Ruelas está con Pammella Velazquez Gonzalez y 2 personas más.</p>
06 may 18	Imagen	<p>6 de mayo El recorrer las localidades de nuestro municipio me ha permitido conocer personas extraordinarias, ayer tuve la fortuna de saludar a la Sra. Luisa de la comunidad de El Barro y a pesar de su edad ella se siente y actúa como una persona joven llena de vida, buen humor y optimismo. Los buenos somos más y trabajaremos para mejorar las condiciones de todos. La cual no se encuentra registrada en la agenda conforme a FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización). En donde se advierte un aproximado de 3 estandartes, 3 playeras, y un aproximado de 1 cachuchas y 1 bandera y recorrió 32 Km ida y vuelta a esta delegación de la cual no muestro contrato de comodato de automóvil ni factura de gasolina ante los proveedores autorizados por el INE. De esto se advierte que dolosamente el referido candidato, realiza actividades de competencia desleal respecto del resto de los competidores, eroga gastos que oculta al INE, como bien lo dejó descrito en el presente a través de los diversos link y hashtag.</p> <p>https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31958054_10215808405618785_2495049078950330368_n.jpg?nc_cat=0&oh=656cd3a43f36e48d02851c7ddffbee92&oe=5BF443AE</p> <p>#SoyIndependiente</p> <p>#RuelasPresidente</p>
06 may 18	Imagen	<p>06 MAYO 2018 solo se dedica a subir un video de Eugenia Sanción de su equipo de la planilla registrada ante el INE a través de su cuenta de</p>

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL**

		<p>Facebook, del cual se desprende al final del mismo, la promoción respecto a su candidatura. El día de cuenta para los efectos que haya lugar no ser registrado conforme a la agenda tampoco los gastos que erogo. La conducta del candidato es oscura, ya que es una actividad no registrada, es dolosa, ya que realiza actividades que no agenda conforme a los Lineamientos del INE. Conforme al FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización). En donde abajo dejo el link y leyenda de su texto.</p> <p>Afortunado que esta gran mujer de Estipac forme parte del equipo que me acompaña, muchos partidos estaban tras de ella y que creyera en el proyecto independiente me llena de orgullo. Les presento a Maru Sanción.</p> <p>https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/videos/2111151632494666/?t=61</p>
--	--	--

1.- El 1 de mayo 2018, a las 22:06 horas, el candidato sube a su página de Facebook, una imagen de Él mismo, donde se logra apreciar la manita, así como su nombre, la cual se aprecia en los murales que he señalado en el párrafo que antecede. Aunado a esto, realiza caminatas como bien se aprecia la que realizó en Atotonilco el bajo, como aquí dejé reproducido "Renè Ruelas compartió una publicación. 1 de mayo

Sumamente agradecido por el recibimiento que tuvimos hoy en Atotonilco. ¡ATOTONILCO ES INDEPENDIENTE!!!" Renè Ruelas actualizó su foto del perfil. 1 de mayo **ACTIVIDAD PROSELITISTA Y GASTOS NO REPORTADOS NI AGENDADOS POR EL CANDIDATO INDEPENDIENTE A LA ALCALDÍA DE VILLA CORONA, JAL., C. LUIS RENE RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS", conforme a la agenda de eventos políticos, omitiendo los Lineamientos del FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización) de la campaña dentro del Proceso Electoral 2017—2018 dentro del ámbito local en específico Villa Corona, Jal., emitida por el INE**

10 may 18	Imágenes	<p>A través de la página de Facebook, el día 10 de mayo de 2018, el candidato independiente a la alcaldía de Villa Corona, Jalisco, C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS", publicó imágenes del evento que tuvo con motivo del día de las madres y, si bien es cierto que dicho acto fue reportado en la agenda del INE, no menos cierto lo es, que el costo de operación y logística, jamás lo reportó el referido candidato. Conforme a FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización).</p> <p>De las fotos que subió a su página de Facebook, puede apreciarse que el candidato en cuestión al presente procedimiento gastó dinero para rentar el local, donde llevó a cabo el evento del día de las madres; el local lo adorno con arreglos florales; se aprecia que hay varias mesas con manteles, lo cual puede presumirse que gasto dinero en la renta de dichos inmuebles; realizó un gasto para adorno floral de centro de mesa; asimismo se puede apreciar de las imágenes, el gasto en el consumo de vasos</p>
-----------	----------	---

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL**

		<p>desechables, refrescos, así como unas botellas de algún tipo de bebida alcohólica.</p> <p><u>Renè Ruelas</u> actualizó su foto del perfil.</p> <p>https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/1351098910209177061893355786663371404449657n.jpg?ncat=0&oh=2501bf7a1d41</p> <p>https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13139152_10208850785562632_5396885071742060253_n.jpg?nc_cat=0&oh=707694c6a540630a056658e2b0f6c712&oe=5BABCEAF</p>
12 may 18	Imagen	<p>Solo se dedica a subir un video de Miguel de su equipo de la planilla registrada ante el INE a través de su cuenta de Facebook, del cual se desprende al final del mismo, la promoción respecto a su candidatura. El día de cuenta para los efectos que haya lugar no ser registrado conforme a la agenda tampoco los gastos que erogó. La conducta del candidato es oscura, ya que es una actividad no registrada, es dolosa, ya que realiza actividades que no agenda conforme a los Lineamientos del INE. Conforme al FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización). En donde abajo dejo el link y leyenda de su texto.</p> <p>https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/videos/2113926302217199/?t=32</p> <p>El doctor Miguel es una persona que desempeña su profesión como pocos, su gran responsabilidad y calidad en el servicio se ha ganado la admiración y respeto de muchas personas donde me incluyo. El que forme parte de la planilla independiente y sea el único médico en la contienda me llena de orgullo y estamos apostándole por la salud de todos los villa Coronenses. #SoyIndependiente #RuelasPresidente.</p>
13 may 18	Imagen	<p>A través de la página de Facebook, el día 13 de mayo de 2018, a las 10:45, el candidato independiente a la alcaldía de Villa Corona, Jalisco, C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS", de propia voz, informa lo que hizo el día anterior, esto es el 12 de mayo, advirtiéndose de esta publicación los siguientes elementos no reportados, banderas y sillas no reportadas, al igual la imagen fue tomada en la delegación de Estipac Mpio de Villa Corona, Jal. A 28 Km de distancia ida y vuelta, sin presentar contrato de comodato de automóvil ni gastos por gasolina conforme a FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización). .- publicación: 11 de Junio de 2018, 00:25, pública, muestra al candidato con trece personas más, las cuales se muestran uniformadas en su prenda superior. Publicado bajo el Link:</p>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL

		https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216107638739426&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3&theater
14 may 18	Imagen	<p>Pública, EL C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS", en donde muestra una imagen en donde narra los hechos que hizo un festival dedicado al 10 de mayo en un lugar en donde no muestra contrato de renta ni de comodato e igual el evento se realizó a 28 Km de distancia ida y vuelta en la delegación de Estipac Mpio de Villa Corona, Jal. Conforme a FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización).</p> <p>Publicado bajo el Link: https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/pcb.2114896368786859/2114895932120236/?type=3 </p>
17 may 18	Imagen	<p>Pública, EL C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS", en donde muestra una imagen que estuvo en la delegación de Atotonilco el Bajo Mpio de Villa Corona, Jal., 22 Km de distancia ida y vuelta donde muestra gorras, cachuchas y estandartes sin llevar a cabo el seguimiento del a FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización).</p> <p>Publicado bajo el Link https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32792454_2116437478632748_1896838440461271040_n.jpg?nc_cat=0&oh=1518da42d5ab3984f11e2cb1705a1191&oe=5BA4A5D3 </p>
18 may 18	Imagen	<p>Pública, EL C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS", en donde muestra una imagen que estuvo en la delegación de El Barrio de Guadalupe Mpio de Villa Corona, Jal., 32 Km de distancia ida y vuelta donde muestra a lo menos 1 manta de 12 Mts², 22 cachuchas y a lo menos 21 estandartes, 24 camisetas sin llevar a cabo el seguimiento del a FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización).</p> <p>Publicado bajo el Link https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215908586243238&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3 </p>
24 may 18	Imagen	<p>EL C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS", en donde muestra una imagen que estuvo en la delegación de Estipac Mpio de Villa Corona, Jal., 28 Km de distancia ida y vuelta donde muestra a lo menos 3 bocinas con tripie, 1 micrófono, 1 mesa, 35 sillas, 6 cachuchas, sin llevar a cabo el seguimiento del a FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización).</p> <p>Ya iniciamos con las reuniones de barrio, muy contentos de la asistencia y participación de las personas del Barrio de la alberca en Juan Gil Preciado. Estás re...</p> <p>Publicado bajo el Link https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/pcb.211983952 </p>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL

28 may 18	Imagen	<p>EL C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS", en donde muestra una imagen que estuvo en el Mpio de Villa Corona, Jal., un día antes donde muestra a lo menos audio, 1 micrófono, 150 sillas, 20 cachuchas, 15 estandarte, 16 banderas, 70 playeras en color blanco y negro, 1 escenario, 1 Lona de 5Mt², sin llevar a cabo el seguimiento del a FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización).</p> <p>https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/33778966_10215989607348715_8361733801218408448_n.jpg?nc_cat=0&oh=dd8a711d1f70239f88664f8e8f4fc8e&oe=5BD5BA0C</p> <p>https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/33923623_10215989608428742_5819944409956876288_n.jpg?nc_cat=0&oh=8f17c32c3c6f9e20547884a90958c415&oe=5BA6F277</p> <p>https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/33720290_10215989607748725_8821785009766531072_n.jpg?nc_cat=0&oh=0b5b00131f85014f925784f45efc37ee&oe=5BA50462</p>
11 jun 18	Imagen	<p>Imagen</p> <p>Publicación: 11 de Junio de 2018, 00:56, pública, EL C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS", muestra un video de una avanzada, donde se aprecian dos docenas de banderas del logo del candidato, se escucha una banda tipo militar fue realizado en Estipac, Jal a 28 Km de distancia de ida y vuelta sin presentar contrato de comodato de automóvil ni gastos por gasolina, conforme a FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización).</p> <p>Publicado bajo el Link: https://www.facebook.com/luisitin88/videos/10216107750982232/</p>
11 jun 18	Imagen	<p>Publicación: 11 de junio de 2018, 19:27, EL C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS", pública, muestra al candidato con once personas más, las cuales se muestran uniformadas en su prenda superior, más dos docenas de banderas del logo del candidato. Conforme a FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización).</p> <p>Publicado bajo el Link: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216113337761898&set=a.3834751462987.2167626.1103967893&type=3&theater</p>
11 jun 18	Imagen	<p>Publicación: 11 de Junio de 2018, 21:13, estatus público, a través de su página EL C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS", publico en diversos horarios 21:13, 19:27, 00:56, faltado a las reglas conforme a FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización, de Facebook el candidato. De las imágenes que aquí se muestran se puede apreciar en varios horarios al menos lo siguiente:</p>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL

		<p>9 Banderas de 5 mts², 5 estandartes, 30 banderas, 10 playeras en color negro, 5 playeras en color blanco en cada horario más haciendo mención que son con personas diferentes, 100 sillas, 5 bocinas, 1 Micrófono De 150 a 200 cachuchas, distancia a 28 km ida y vuelta en delegación Estipac, falta de contrato de comodato y reporte de gastos de gasolina. Publicadas las imágenes bajo los Link:</p> <p>https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519980657831/?type=3&theater</p> <p>https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519903991172/?type=3&theater</p> <p>https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519833991179/?type=3&theater</p> <p>https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519710657858/?type=3&theater</p> <p>https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519670657862/?type=3&theater</p> <p>https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519610657868/?type=3&theater</p> <p>https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519543991208/?type=3&theater</p> <p>https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519520657877/?type=3&theater</p> <p>https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519317324564/?type=3&theater</p> <p>https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519493991213/?type=3&theater</p> <p>https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519430657886/?type=3&theater</p> <p>https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519283991234/?type=3&theater</p> <p>https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129519980657831/?type=3</p> <p>Desprendiéndose de las imágenes publicadas por el candidato, el uso de una lámpara de alumbrado en exteriores, tarima y la multitud de banderas y camisas.</p>
	Imagen	Imagen
	Imagen	Imagen
12 jun 18	Imágenes	<p>Publicación: 12 de Junio de 2018, 09:30, EL C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS", estatus público, a través de su página de Facebook el candidato. Conforme a FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización). Publicadas las imágenes bajo los Link:</p>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL

		https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129761110633718/?type=3&theater https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129761040633725/?type=3&theater https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129760980633731/?type=3&theater https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129760923967070/?type=3&theater https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/a.2044498665826630.1073741829.2040130696263427/2129760870633742/?type=3&theater Desprendiéndose de las imágenes publicadas por el candidato, cerca de veinte camisetas con su logotipo y el uso de diversos vehículos.
	Imagen	Imagen
13 jun 18		Publicación: 13 de Junio de 2018, 15:09, estatus público, a través de su página de Facebook el candidato. EL C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS" , estatus público, a través de su página de Facebook el candidato. Sin tomar en cuenta las reglas del FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS , el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización y que por lo menos 300 sillas en 6 eventos en lugares diferentes, 1 mesa, refrigerio, 5 bocinas, 1, micrófono. Publicadas las imágenes bajo el Link: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216127218068897&set=pcb.10216127228749164&type=3&theater Desprendiéndose de las imágenes publicadas por el candidato, el uso de camisas promocionales, uso de aparato de sonido, sillas y refrigerios para asistentes. También dan cuenta de la realización de por lo menos tres eventos de campañas distintos, como puede observarse de los entornos en las imágenes, como puede ser uno, el suelo de los distintos lugares.
	Imagen	Imagen
	Imagen	Imagen
19 jun 18	Imágenes	Publicación: 19 de junio de 2018, 12:04, EL C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS" , estatus público, a través de su página de Facebook el candidato. Sin tomar en cuenta las reglas del FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS , el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización Publicadas las imágenes bajo el Link: https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/posts/2135635396712956 Desprendiéndose de las imágenes publicadas por el candidato, el uso de una lámpara de alumbrado en exteriores, aparato de sonido y audio, camisas promocionales, sillas y refrigerios para asistentes. También dan cuenta de la

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL**

		<p>realización de por lo menos tres eventos de campañas distintos, como puede observarse de los entornos en las imágenes, como puede ser uno, el suelo de los distintos lugares.</p> <p>https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214697817816411&set=a.3688578930392.2190549.1152778114&type=3</p>
	Imagen	
	Imagen	Imagen
	Imagen	Imagen
20 jun 18	Imagen	<p>20 JUNIO 2018 a las 17:33 horas, el candidato independiente a la alcaldía de Villa Corona, Jalisco, C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS", publicó en su cuenta de Facebook, una entrevista que le realizaron en canal 21, el cual se encuentra en la ciudad de Zacoalco de Torres, Jalisco, con una distancia de 70 km ida y vuelta, para lo cual me permito realizar una puntuación muy precisa, el candidato, realizó un gasto de traslado y actividad proselitista sin reportarlo, conforme al FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización). Con lo anterior, se aprecia el dolo del candidato al esconder información al Instituto Nacional Electoral, información que bien sabe le es perjudicial, en cuanto a los gastos en su tope de campaña. Tales aseveraciones se encuentran en los siguientes link</p>
	Imagen	<p>JUNIO 2018 EL C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS" publica una imagen a través de su página de Facebook. Sin tomar en cuenta al INE conforme a las reglas del FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización, de la cual se puede apreciar al menos lo siguiente: 80 sillas, 2 estandartes, 10 camisetas color negro con logo de Ruelas, esto fue en la plaza de la delegación de Juan Gil preciado Mpio de Villa Corona, Jal. Con una distancia de 13 Km en donde a lo menos uso un vehículo para transportarse con un contrato de comodato y gasolina para el vehículo. Publicadas de la imagen del link de abajo:</p> <p>https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/36002659_2139835289626300_3897661079995547648_n.jpg?nc_cat=0&oh=7d033d6c2017fa290aeea06df8ffcbdb&oe=5BA7A5F5</p>
23 JUN 18	Imagen	<p>34 estandartes, 44 playeras, 22 cachuchas</p> <p>https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/pcb.2139835452959617/2139834786293017/?type=3</p>
	Imagen	

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL

24 jun 18	Imagen	<p>EL C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA “RENE RUELAS” publica un video a través de su página de Facebook. Sin tomar del INE conforme a las reglas del FORMATO “IC”- INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización, de la cual se puede apreciar al menos lo siguiente: 1 manta de 12 Mts², 50 banderas 3 Mts², 8 estandartes, 50 playeras en color negro. Publicadas de las imágenes del video del link de abajo:</p> <p>https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/videos/2141274539482375/</p>
25 jun 18	Imágenes	<p>Publicación: 25 de Junio de 2018, 11:39, el estatus público, a través de su página de Facebook el candidato. Publicadas las imágenes bajo el Link:</p> <p>https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216230480690398&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3&theater</p> <p>Desprendiéndose de las imágenes publicadas por el candidato, el uso de una lámpara de alumbrado en exteriores, aparato de sonido y audio, camisas promocionales, sillas y refrigerios para asistentes.</p> <p>Es importante, que ésta H. Autoridad en materia electoral, tenga conocimiento, del dolo con el que se ha venido desenvolviendo el candidato independiente a la alcaldía de Villa Corona, Jalisco, C. Luis René Ruelas Ortega “René Ruelas”, esto lo digo así, debido a que el multicitado candidato dolosamente y muy a su conveniencia, no reporto, no agendó del 29 de abril al 8 de mayo, así como los días 11, 14, 15, 16 de mayo, todos del presente año 2018, hecho realizado por el referido candidato, el cual sabía bien que se encontraba violando disposiciones electorales.</p>
	Imagen	Imagen
01 jul 18	Imagen	<p>01 de julio 2018 a las 22:51 Has. EL C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA “RENE RUELAS” publica una foto a través de su página de Facebook de la cual se puede apreciar al menos 20 banderas, 2 mantas de aproximadamente 10 mts² cada una, 4 estandartes y otros elementos que no se pueden apreciar por la oscuridad de la noche, conducta típica violatoria de la veda electoral. Sin tomar en cuenta y la agenda de actividades del INE conforme a las reglas del FORMATO “IC”-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización</p> <p>Publicadas las imágenes bajo el Link:</p> <p>https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216294268805061&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3</p>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL

		<p>René Ruelas · 1 de julio a las 22:51 ·</p> <p><i>Muchas gracias por la confianza de todo el municipio, se decía que la elección iba a ser cerrada y la tendencia indica que ganamos con una buena diferencia. Estamos muy contentos por vernos favorecidos por el voto, pero también estamos conscientes del gran reto que tenemos que es sacar adelante a nuestro municipio. Invitamos a todos a trabajar, a los regidores de oposición para hacer un verdadero equipo y hacer que las buenas noticias regresen a nuestro municipio. Nuestro municipio es independiente!!!!</i></p>
--	--	--

FORMA DE DEMOSTRAR EL REBASE DE LOS GASTOS DE CAMPAÑA

A continuación, se muestra a la UTF el análisis de la evidencia y prueba recabada, que permite concluir que, en la elección de presidente municipal de Villa Corona, Jalisco 2018, el candidato independiente Luis René Ruelas Ortega, superó la cantidad de los gastos autorizados por la autoridad electoral local, circunstancia que traería como consecuencia la obtención de la constancia de validez y mayoría, otorgada al candidato independiente de la elección en que participó. Esta evidencia recabada se muestra en tres apartados a). Actos anticipados de campaña; b). Actividades no agendadas; c). Gastos no reportados; sustentados en (ANEXOS 1, 2, 3, 4, 5)

Expuestos los hechos anteriores, así como la tabla que refiere a cada hecho que forman la base medular de la presente denuncia, es necesario hacer notar, que del calendario integral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC) Proceso Electoral Concurrente 2017-2018, Última modificación 6 de febrero 2018, Acuerdo IEPC-ACG-021/2018, se dejaron claramente establecidos los días en que los candidatos a munícipes deberían realizar proselitismo, lo que en el caso que se trata, no aconteció, pues el candidato independiente a la presidencia municipal de Villa Corona, Jalisco, violó el acuerdo de una autoridad electoral en ejercicio de sus funciones, al ejecutar actos proselitistas, que le llevaron a realizar un gastos fuera de los tiempos establecidos, sin haber estado agendados por estar fuera de tiempo y por constituir una erogación indebida en el marco de la reglamentación de la fiscalización del INE a los partidos y candidatos contendientes en una elección.

De lo anterior, se advierte que desde el inicio del Proceso Electoral e incluso antes de las campañas hasta el fin de éstas, en el municipio de Villa Corona, Jalisco, el candidato denunciado, ha realizado actos y proselitismo omitiendo su reporte a la autoridad en materia de fiscalización, en una cantidad tal, que excede los topes de gastos autorizados por la autoridad electoral para dicha elección.

Particularmente, ha faltado a su obligación de presentar ante el órgano fiscalizador, sus informes ciertos, completos y congruentes relativos al origen y monto de todos los ingresos que recibió, así como su empleo y aplicación, adjuntado a los mismos la documentación soporte y contable que compruebe las operaciones realizadas; esto constituye una falta grave en materia político electoral y de fiscalización electoral, que incide negativamente afectando en el Proceso Electoral los valores y principios establecidos por la Constitución y las legislación general, local, relativa a la función electoral y la contienda entre los actores políticos, para obtener la mayoría del voto ciudadano. La superación de los gastos de campaña por parte del actor político denunciado, rompe con los principios de certeza, legalidad, equidad en la contienda, así como la máxima transparencia y máxima publicidad a que está obligado, ante la autoridad y ante la ciudadanía; las infracciones que se acreditan del candidato independiente Luis René Ruelas Ortega, en Villa Corona, generaron la posibilidad de aplicarles una fiscalización efectiva a través de sus omisiones y de hacer aparecer sus actividades, como si fueran las propias de una asociación civil, con una labor social y

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL

desinteresada, “siendo que sus actividades “sociales” eran llevadas a cabo por el ciudadano Luis René Ruelas Ortega, en su calidad de integrante de la asociación civil Villa Corona Antigua, (que no cuenta facultades ante el SAT, para recabar fondos y destinarlos a una labor) y que además las intercala en la misma página web con mensajes en los que intercala su imagen con actos de beneficencia social. Resulta público y notorio que estas actividades de beneficencia social las promovió la misma persona durante el mismo tiempo (actual Proceso Electoral) para favorecer su imagen y beneficiar su candidatura independiente en el pueblo de Villa Corona, Jalisco en 2018. Entre las acciones simuladas que se describen y las omisiones en materia de fiscalización, generaron la imposibilidad de un seguimiento efectivo por parte de la UTF, a la verificación de los ingresos y egresos del candidato antes señalado, rompiéndose así los principios rectores de la función electoral, de modo especial la equidad de la contienda y la legalidad a la que estaba sujeto, todo actor político en el sistema electoral vigente en México. Lo anteriormente señalado lo soporto a través de los medios de prueba que se presentan como (ANEXOS 1, 2, 3, 4, 5)

**REBASE DE TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA DEL CANDIDATO INDEPENDIENTE LUIS
RENÉ RUELAS ORTEGAS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA CORONA,
JALISCO**

De los artículos 79, numeral 1, inciso b), de la LGPP; y, 256, numeral 1; 447, numeral 1, fracción III; y, 449, numeral 1, fracciones III, IV y V, del CEPSEJ, se desprende que constituyen infracciones de los partidos políticos y candidatos partidistas, el incumplimiento de sus obligaciones de informar los recursos recibidos, en dinero o en especie, destinados a su campaña; presentar los informes de gastos de campaña a que obligan las leyes respectivas y respetar el tope de gastos de campaña establecidos.

Es evidente, que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los sujetos políticos, el cumplir con los topes de gastos establecidos, es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por objeto y/o resultado poner en riesgo la equidad en el Proceso Electoral, lo cual, en la especie ha ocurrido.

*Y, como se refirió en el punto 1, de los hechos de esta denuncia, mediante Acuerdo IEPC-ACG-156/2017 del 30 de diciembre de 2017, el IEPC Jalisco, aprobó en **\$75,490.00 MN**, el tope de gastos de campaña del municipio de Villa Corona, Jalisco en el proceso de 2018. Tope, que ha sido superado por el candidato denunciando, en más de un 5%, derivado de la cuantificación de gastos no reportados, como se expondrá en el (ANEXO 5) que se acompaña a la presente.*

DETERMINACIÓN DE COSTOS Y EROGACIONES

Para efectos de cuantificar el costo de los gastos no reportados por el candidato denunciado por la candidatura independiente, sujeto obligado, esa autoridad deberá observar el procedimiento previsto en el artículo 27, del Reglamento de Fiscalización, descrito a continuación:

- *Identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio para determinar un valor razonable, considerando la información presentada por los sujetos obligados y la Lista Nacional de Proveedores para elaborar una matriz de precios.*
- *Una vez identificados los gastos no reportados, utilizará su criterio basado en la matriz de precios determinada por esa Unidad Técnica de Fiscalización o del Registro Nacional de Proveedores para aplicarlo a los ingresos y gastos que no reporten.*
- *En el caso de los gastos que no sean localizados en la matriz de precios, por no contener un registro similar a la propaganda no reportada, procederá a tomar el costo de cotizaciones de mercado con atributos y características similares, los cuales incorporará en la matriz de precios correspondiente.*

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL**

Ahora bien, para los efectos de esta queja, y para estimar el costo de los bienes y servicios no reportados que se denuncian; costos que la Unidad Técnica de Fiscalización corroborará en su caso, mediante el procedimiento antes descrito, es que, se procedió a cotizarlos según las reglas del mercado como sigue:

De acuerdo con la investigación realizada, respecto a la pinta de bardas, por parte del pinto Gustavo Martínez Ruíz, se nos hizo llegar la siguiente cotización: de una medida de 9.60 mts2 da un costo por barda \$400.00 + IVA a nivel estado, considerando un volumen mínimo de 2,500 piezas, anexo cotización simple.

De lo anterior, es posible concluir que los costos del mercado de los gastos no reportados, son los que se presentan como (ANEXO 5)

De esta forma, se tiene que el candidato denunciado omitió reportar los gastos de campaña descritos en el (ANEXO 5)

PRECEPTOS LEGALES TRANSGREDIDOS

En virtud de los hechos narrados, tanto, el candidato denunciado, como la coalición que lo postuló, incumplieron con lo dispuesto en los artículos 449, numeral 1, fracciones III, IV y V, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco; 25, numeral 1, incisos k), n) y t); 79, numeral 1, inciso b), fracciones I, II y III; 425 al 431, de la Ley General de Partidos; 443, numeral 1, incisos a), b), c), d) y f); y, 445, numeral 1, incisos c), d) y e), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 17; 18; 38, numeral 1; y, 127, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización del INE.

CONCLUSIÓN

En el presente caso, y en cumplimiento al artículo 37, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización del INE, la Unidad Técnica de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos deberá formular el Proyecto de Resolución correspondiente, el cual presentará a la Comisión de Fiscalización, en el sentido de determinar que el candidato denunciado rebasó el tope de gasto de campaña autorizado para la elección de munícipes en Villa Corona, Jalisco, en más de un 5% como se demuestra del (ANEXO 5) el monto total autorizado, y al habérsele entregado su constancia de mayoría, se constituirá en causal de nulidad de dicha elección, según lo prevé el artículo 41, Base VI, de la Constitución.

(...).

Elementos aportados al escrito de queja por el quejoso para sustentar los hechos denunciados:

- **Documental pública.** consistente en la **Escritura Pública número 9859, que contiene la protocolización de una certificación de fe de hechos, del tomo 15, libro VII, folio 29261**, levantada a las 15:30 quince horas con treinta minutos del día 10 de julio de 2018, por el licenciado Jorge Chávez Galván, Notario Público titular número 1, de Tizapan el Alto, Jalisco.
- **Documental pública.** Consistente en la “agenda de eventos políticos, de la campaña, del Proceso Electoral 2017-2018, del ámbito local”, generado por el

sistema de Rendición de Cuentas de los Actores Políticos del INE, la cual presento en copia debidamente certificada por el notario público número ,1 uno de Villa Corona, Jalisco, licenciado José Hinojosa Torres.

- **Documental pública.** Consistente en el formato “IC” INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS” del Sistema Integral de Fiscalización, del Instituto Nacional Electoral, el cual exhibo en copia certificada por el notario público número ,1 uno de Villa Corona, Jalisco, licenciado José Hinojosa Torres.

- **Prueba documental pública.** - Consistente en el testimonio de la escritura pública número 12,693, de fecha 19 de julio del año 2018, pasada ante la fe del notario público número 02 dos de la municipalidad El Salto, Jalisco, la cual contiene la certificación de hechos, referente a 25 fotografías.

- **Prueba técnica.** Consistente en el cálculo de gastos de campaña del candidato independiente C. Luis René Ruelas Ortega, la cual se concatena con las pruebas que se exhiben como anexo 1, 2, 3 y 4.

- **Pruebas técnicas.** Consistentes en la totalidad de imágenes fotográficas en impresión, así como todos y cada uno de los link, direcciones URL, HASHTAG, de la página de facebook del denunciado Luis René Ruelas Ortega “René Ruelas”, en las cuales se observan los tres elementos señalados en el escrito y consisten en: actos anticipados de campaña, eventos no agendados, gastos no reportados, como bien se aprecia del punto 7 de hechos de la denuncia de cuenta, misma que relaciono con los citados hechos y con las demás pruebas.

- **La presuncional.** En su doble aspecto, legal y humana.

- **La instrumental de actuaciones.** En todo aquello que beneficie a los intereses de la parte quejosa.

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El veintiocho de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, tuvo por admitida la queja mencionada y acordó integrar el expediente respectivo con el número **INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL**, registrarlo en el libro de gobierno, admitir a trámite y sustanciación el escrito de mérito, así como notificar el inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General del Instituto, así como al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización de dicho órgano colegiado, a la quejosa, la C. María del Rosario Copado Anzaldo, otrora candidata a la Presidencia Municipal del Villa

Corona, Jalisco, postulada por el Partido Político Movimiento Ciudadano, ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco, al C. Luis René Ruelas Ortega, candidato independiente, postulado al cargo de Presidente Municipal de Villa Corona, Jalisco; remitiéndoles las constancias que obren en el expediente, publicar el acuerdo de referencia en los estrados del Instituto Nacional Electoral. (Foja 180 del expediente).

IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento.

- a) El veintiocho de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 181 y 182 del expediente).
- b) El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en el Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de admisión, la cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 183 del expediente).

V. Notificación del inicio del procedimiento al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El veintiocho de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/41034/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la recepción y el registro en el libro de gobierno del procedimiento de queja identificado como INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL. (Foja 184 del expediente).

VI. Notificación del inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintiocho de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/41035/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la recepción y el registro en el libro de gobierno del procedimiento de queja identificado como INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL. (Foja 185 del expediente).

VII. Notificación de inicio del procedimiento al Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General Electoral del Instituto Nacional Electoral. El nueve de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/41364/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, le notifica a la quejosa, la C. María del Rosario Copado Anzaldo, otrora candidata a la Presidencia

Municipal de Villa Corona, Jalisco, postulada por el Partido Político Movimiento Ciudadano, ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco, el inicio del procedimiento de mérito a través de su Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 186 y 187 del expediente).

VIII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al C. Luis René Ruelas Ortega, otrora candidato independiente, postulado al cargo de Presidente Municipal de Villa Corona, Jalisco.

a) El diez de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JAL-VE-2112-2018, la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, notificó el inicio del procedimiento de mérito y emplazo al entonces candidato independiente, postulado al cargo de Presidente Municipal de Villa Corona, Jalisco, corriéndole traslado con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Fojas de la 191 a la 196 del expediente).

b) Mediante oficio de fecha trece de agosto de dos mil dieciocho, a través del cual el otrora candidato independiente al cargo de Presidente Municipal de Villa Corona, el C. Luis René Ruelas Ortega, dio respuesta al emplazamiento que en términos del artículo 4242, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala: (Fojas de la 197 a la 255 del expediente).

“ (...)

EXPONGO

Con fundamento en mi calidad de Candidato Electo con notificación de fecha 10 de agosto del presente año a las 18:10 horas y en contestación al procedimiento presentado, a efectos de aclarar y desmentir las acusaciones realizadas manifiesto:

OTRORA CANDIDATO INDEPENDIENTE. - Por el municipio de Villa Corona en el marco del Proceso Electoral 2017-2018 en el Estado de Jalisco. El que suscribe la presente contestación para los efectos legales a que haya lugar, **LUIS RENE RUELAS ORTEGA**, candidato electo al gobierno municipal por la vía independiente en Villa Corona, Jalisco, en el Proceso Electoral 2017-2018, con el carácter que tengo debidamente acreditado ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, del cual anexo constancia de mayoría.

DOMICILIO DE OTRORA CANDIDATO INDEPENDIENTE. - El anteriormente señalado.

ACTO IMPUGNADO. - el presente procedimiento, por ser parte.

De los hechos manifestados. –

1.- Tal y como la quejosa lo refiere mediante Acuerdo emitido, de la Convocatoria de elecciones ordinarias por el H. Congreso del estado de Jalisco el pasado 1 de septiembre del año 2017, acuerdo IEPC-ACG-087/2017 en el que se definieron las bases adherentes a dicho proceso en nuestro estado, para la elección de gobernador, diputados y presidentes municipales, el suscrito quede debidamente acreditado como candidato por la vía independiente de acuerdo a la normatividad referida.

2.- En virtud del pasado Proceso Electoral inmediato en el Estado de Jalisco y de acuerdo a los Lineamientos emitidos por Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, LUIS RENE RUELAS ORTEGA, quede como candidato electo al gobierno municipal por la vía independiente en Villa Corona, Jalisco, en el Proceso Electoral 2018, lo cual acreditado mediante constancia de mayoría en copia simple emitida por el instituto mencionado.

3.- Tal y como se desprende del escrito de queja del presente curso, ofertado por la C. María del Rosario Copado Anzaldo, en el que argumenta que los comicios electorales 2018, comenzaron el 29 de abril del 2018, negamos rotundamente los acontecimientos o actos como ella lo menciona, como:

- A) Actos anticipados de campaña
- B) Actividades no agendadas ante el INE, y
- C) Gastos no reportados al INE

De acuerdo a lo siguiente:

A) Actos anticipados de campaña, en lo que refiere a la actividad proselitista que se demanda con respecto a las publicaciones difundidas en la llamada Facebook con fechas 8, 13 y 18 de marzo, 01, 11, 21 y 22 de abril, todos del año 2018, por lo anteriormente aludido se niega rotundamente lo manifestado por la quejosa. Ya que dichos actos, eventos a los que hace alusión, de lo que es importante destacar fueron realizados por miembros de una red social denominada "villa corona antigua" de la red Facebook, la cual tiene por objeto, rescatar y promover las costumbres y tradiciones, así como la de preservar y conservar la cultural del municipio de villa corona, un grupo social sin fin de lucro. Es por ello que no existe la ventaja indebida en el Proceso Electoral, puesto que no fue a mutuo propio los eventos señalados, además de que jamás existió manifestación electoral alguna.

Ahora bien, el mismo Proceso Electoral se integra por varias etapas señaladas en el propio calendario integrado que para efectos del proceso concurrente 2017-2018 definió la autoridad electoral, entonces pues al ser superada la etapa que manifiesta la inconformista simplemente son alegres argumentaciones carentes de determinación con la única intención de provocar efectos para variar el sentido de la elección.

B) Actividades no agendadas ante el INE.

Con respecto a este punto, el candidato electo con constancia de validez de mayoría, hizo entrega a la autoridad competente de todos y cada una de las actividades agendadas conforme el programa del proceso de campaña, establecido por el equipo de trabajo según las necesidades y recursos que se presentaron y así quedo manifestado en el Reporte de Catalogo auxiliar de eventos de campaña ordinaria 2017-2018, presentadas ante el sistema integral de fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Presentando fechas en las que el equipo decidió no realizar actividades.

C) Gastos no reportados al INE.

Con respecto al contenido manifestado dentro del presente inciso, lo que la quejosa preténde es sorprender la honorabilidad de la Unidad técnica de fiscalización toda vez que del contenido descrito se advierten y se aprecian inconsistencias e incongruencias de manera subjetiva y no cuantitativa, ya que solo refiere fechas, sin sustento y fundamento alguno. No existiendo una concatenación, lógica, jurídica y natural sobre los excesos de gastos, donde según ella advierte se rebasa el tope de campaña, haciendo mención que como ha quedado referido con anterioridad, la página de "villa corona antigua "es solo una red social y no una asociación civil como ella refiere; lo que deja ver clara su intención de confundir y opacar el proceso democrático de estos comicios electorales 2017-2018 en el municipio. Aunado a lo anterior es importante referir que respecto a la página de Villa Corona Antigua esta se integra por un grupo cerrado de la Red Facebook, de la cual la quejosa era miembro activa de dicha página ya que la permanencia en la misma es voluntaria, ya que sus integrantes deciden en que momento ingresar o abandonar dicho grupo virtual. Por lo referido con antelación para mayor ilustración se anexa captura de pantalla donde se demuestra que la quejosa tenía conocimiento de todas las acciones y programas que se llevaban a cabo por dicha página.

Y respecto a las bardas a las que hace alusión, las mismas, fueron realizadas bajo un concepto de arte urbano, con creatividad, trabajo y desempeño, propio de quienes integraron éste nuestro equipo de trabajo, ya que fuimos nosotros mismos, quienes realizamos y llevamos a cabo dicha actividad. Aunado a lo anterior respecto a la cotización que la quejosa presenta resulta irrisorio sin fundamento toda vez que respecto a este rubro fue declarado en el informe de fiscalización en donde se detalla que el material fue donado por simpatizantes, así como la mano de obra de pintura fue realizada por el equipo de trabajo no generando costo alguno para la campaña electoral de este grupo Independiente, dicha labor fue realizada en aproximadamente un mes de trabajo.

Por otra parte, es menester de su servidor mencionar que, para esta participación democrática, la página oficial, es la manifestada ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, con el nombre de Rene Ruelas, en la red social Facebook. Aunado a lo referido con antelación respecto a este apartado de los incisos B) y C) es importante visibilizar que se carece de materia para los efectos del estudio toda vez, que el órgano propio del INE, mismo que no ha emitido hasta el momento resolución alguna en mi contra, por ello al carecer de determinación para efectos de variar el sentido de la elección, reiterando que la inconforme solo lo hace basada en argumentaciones carentes y sin sustento jurídico alguno.

DE LOS AGRAVIOS Y PRECEPTOS VIOLADOS.

Actos anticipados de campaña, actividades no agendadas ante el INE y gastos no reportados ante el INE, negamos rotundamente se haya tenido un gasto de campaña, por la cantidad que se menciona, siendo importante manifestar a este tribunal que nuestra campaña fue realizada y apegada al concepto de austeridad que marcaron nuestros principios y valores que como grupo independiente, los cuales fueron establecidos desde el inicio y hasta el final de este comicio electoral.

(...)"

IX. Remisión de escritos por parte de la C. María del Rosario Copado Anzaldo, otrora candidata a la Presidencia Municipal de Villa Corona, Jalisco, postulada por el Partido Político Movimiento Ciudadano, ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco. El trece de agosto

de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-UTF-JAL-0233-2018, el Enlace de Fiscalización del estado de Jalisco, remitió el escrito de fecha nueve de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual, la otrora candidata citada aporta pruebas referentes al escrito de queja, en contra del C. Luis René Ruelas Ortega, manifestando lo siguiente: (Fojas de la 257 a la 262 y de la 269 a la 274 del expediente).

“ (...)

En el escrito inicial del presente juicio se manifestaron los hechos que fundan el presente juicio, toda vez que se demostrará que el candidato ganador en la elección incurrió en infracciones a la Legislación Electoral al llevar a cabo

- **Actividades de proselitismo fuera de plazo legal para proselitismo del voto** (que implicaron necesariamente una erogación) que pretendían hacerse pasar por actividades con las que se promovía la convivencia de los habitantes del municipio de Villa Corona, otorgando incluso premios en dinero a las y los participantes;
- **Actividades y gastos no reportados a la UTF del INE.** Estas actividades señaladas en el punto anterior, al igual que otras actividades en campaña, no fueron reportadas en la agenda semanal; la comparación entre la agenda de campaña reportada por el candidato independiente en Villa Corona, Jalisco y la difusión que el propio candidato independiente realizaba en su página web en redes sociales, reportan una diferencia tal, que permite advertir en forma objetiva que la candidatura independiente del C. Luis Rene Ruelas Ortega realizó actividades de campaña con gastos y ambos elementos no fueron debidamente reportados ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, circunstancia que el tanto el INE como este tribunal han de ponderar para resolver el presente caso. Cada uno de estos rubros conllevan una sanción en sí.

Para resolver la presente queja, se ofrecieron como pruebas diversas documentales públicas relativas al incluida la agenda de actividades que con 8 días de antelación durante las precampañas y las campañas debía informar a la UTF; del análisis de información difundida en la página web de la UTF - INE y de la página web del candidato independiente Luis René Ruelas Ortega, se desprende en forma objetiva, que dicho candidato no reportó la actividad de cierre de campaña en la que contó con (y pagó) la presencia y la actuación de la cantante Paloma del Río. De igual forma, el candidato independiente Luis Rene Ruelas Ortega tampoco reportó al INE como ingreso las aportaciones del candidato independiente al gobierno de Acatlán de Juárez en 2018, circunstancia que se demuestra con la prueba que en alcance se pone a la consideración de este tribunal.

Sustenta esta promoción lo dispuesto en el artículo 519 del Código Electoral de Jalisco con relación a que constituyen pruebas públicas (párrafo I, fracción IV) Los documentos expedidos por quienes estén investidos de/e pública de acuerdo con la ley, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les consten.

En el presente caso, se trata de las escrituras públicas 12,877 y 12,881, ambas del 8 de agosto de 2018, expedidas por el notario público 2 de El Salto, Jalisco referentes hechos que le constaron y que certifica, relativos a la información difundida en la página web del candidato Luis Rene Ruelas Ortega y confirman lo señalado en el escrito inicial del presente juicio, de que superó los topes de los gastos de campaña, que no sólo los llevó a cabo, sino que no los reportó con antelación al INE a través de la UTF y tampoco reportó los gastos y apoyos recibidos en su campaña. Estos hechos objetivamente difundidos por los propios actores involucrados, cuya veracidad (en cuanto a su

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL**

difusión y su constitución como hecho sancionable) se confirmará con la comparación con los registros de la propia UTF y que el tribunal electoral que conoce para dirimir el presente caso (sobre si propasó o no los gastos de campaña el candidato denunciado en la queja por fiscalización).

Las presentes pruebas forman parte del expediente en materia de fiscalización la certificación de hechos emitido por fedatario público para efectos de integrarse al presente procedimiento.

Fundamenta la petición de incorporar estos elementos de prueba que se aportan, toda vez que son parte de las manifestaciones en el expediente de fiscalización, que son hechos controvertibles señalados en el escrito inicial y prueban fehacientemente los dichos relativos a la superación del tope de gastos de campaña del candidato Luis Rene Ruelas Ortega; de esta manera se funda la causa a resolver este procedimiento sancionador en materia de fiscalización contra el candidato independiente, el C. Luis Rene Ruelas Ortega relativo que sí sobrepasó los gastos de campaña autorizados para el presente Proceso Electoral en Villa Corona, al tiempo que incurrió en actividades fuera de tiempo y sin reportarlas a la UTF del INE en su momento.

En estricto sentido, no se trata de pruebas supervinientes, sino que dan contenido y son parte de las pruebas aportadas en el escrito inicial, relativas al gasto erogado por el cierre de campaña que el candidato independiente no reportó al INE por conducto de la U11 y que ésta, una vez que tiene conocimiento del caso ha de proceder a su verificación con base en sus registros y aquellos aportados con certeza y objetividad a través de la fe pública de un notario. De igual forma constata el ingreso no reportado en dinero y en especie para la campaña del candidato independiente Luis Rene Ruelas Ortega y el caso amerita una indagatoria especial incluso por la evidencia que arroja sobre el posible recurso introducido en la campaña del C. Luis Rene Ruelas Ortega de origen probablemente ilícito; la introducción de los fondos en dinero y en especie del candidato independiente Sierra Cabrera a la campaña de Luis Rene Ruelas Ortega en 2018 de facto constituyen infracciones y delitos, toda vez que no están previstas en la ley, no fueron reportadas al INE y alteraron la igualdad de condiciones en la contienda electoral en el proceso para elegir al gobierno municipal en Villa Corona, al introducir dinero ilegal a la contienda.

De acuerdo a las reglas de la prueba dispuestas en el Código Electoral y de Participación Social de Jalisco (artículo 523) relativas a los medios de impugnación en materia electoral.

1. Son objeto de prueba los hechos controvertibles. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido admitidos o reconocidos por las partes.

2. El que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega, cuando su negativa implique una afirmación. Estas normas no contravienen disposición alguna del reglamento de los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización del INE vigente.

Esta disposición concluye que las pruebas en materia electoral se sujetan a la lógica de los hechos controvertidos y su relación intrínseca, basados en elementos de convicción que dan veracidad a las afirmaciones y las deducciones a partir de lo que se sabe, para concluir si el juicio y los agravios expresados se encuentran fundados o no.

La escritura 12,877 del 8 de agosto de 2018 es una certificación de hechos del notario 2 de El Salto, Jalisco con la que da fe de la veracidad de la información contenida en la página web de Facebook del candidato Ruelas:

• Que el 24 de junio de 2018 se llevó a cabo un acto de cierre de campaña de la candidatura y que dicho acto incurrió en una erogación que no fue debidamente reportada ni acreditada ante el INE a partir del análisis de sus informes publicados en la plataforma de transparencia de las

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL**

candidaturas. De este evento se aporta información certificada por fedatario público, de modo que el INE precisa ponderar la fuerza de los hechos demostrados.

- Que el evento de cierre de la campaña del C. Luis Rene Ruelas Ortega se reportó ante el INE como "evento por reportar" y si en su momento fue reportado, se tendría que constatar el gasto erogado por la presencia de la cantante, las instalaciones para el evento, la luz y el sonido, las sillas y los músicos que acompañaron, según se muestra en la agenda del INE:

(cuadro)

Esta tabla finaliza con el resumen de todos actos realizados en la agenda de campaña del C. Ruelas Ortega, incluidos los eventos por realizar y los cancelados:

EVENTOS POR REALIZAR:	47
EVENTOS REALIZADOS:	0
EVENTOS CANCELADOS:	0
TOTAL, DE EVENTOS:	47

De ello se deduce que la actividad del cierre de la campaña del 24 de junio de 2018 no fue debidamente reportado y acreditado en cuanto a sus gastos; bajo estas consideraciones, no es creíble que bajo ninguna circunstancia que el cierre de la campaña con la cantante Paloma del Río, mariachi y todo el gasto de grupos musicales de la candidatura independiente de Luis Rene Ruelas Ortega de 2018 constituyera la cantidad de un poco más de 16 mil pesos.

El candidato Luis Rene Ruelas Ortega en su informe denominado REPORTE DE CUENTAS AFECTABLES AL INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS

RECURSOS en poder de la UIF; https://sif.utf.ine.mx/sif_transparenciaPublico/consulta?execution=elsi manifestó como gasto en el rubro de gastos por grupos musicales en los cierres de campaña una cantidad de \$ 16,000.00 pesos 00/100 M.N. y tal gasto resulta inverosímil si se compara con la información difundida en Facebook en la cuenta de la candidatura del C. Luis Rene Ruelas Ortega y certificada por el notario público encita, porque una intervención musical como la que realizó la cantante Paloma del Río no puede catalogarse de bajo costo; tampoco es creíble que los costos de la organización del evento y los músicos que acompañaron a esta cantante en el cierre de la campaña del C. Luis Rene Ruelas Ortega, hayan causado una erogación como la reportada del candidato independiente Luis Rene Ruelas Ortega, debido a que un evento de esta magnitud la sola presentación de esta cantante (internacionalmente reconocida) oscila en un costo no menos de 50,000 mil pesos 00/M.N. (por presentación) en la fecha del 24 de junio de 2018.

Lo procedente en el presente caso es que la UTF del 1NE analice el caso y determine el gasto no reportado de la candidatura denunciada, toda vez que por un lado se certifica que el cierre tuvo lugar en las condiciones y gastos probados y certificados por notario público, así como su cálculo mediante la matriz de precios utilizada en el INE para el cálculo de los gastos no reportados por los sujetos obligados en las campañas.

En la escritura 12,881 del 8 de agosto de 2018, del C. Notario Público 2 de El Salto Jalisco, se certifica la información difundida por el C. Ramón Sierra a través de su página web de Facebook registrada bajo la denominación ramón sierra Acatlán de Juárez el 3 de julio de 2018 en la que en un video del propio Sierra Cabrera manifiesta en forma abierta el apoyo brindado en lo personal, financiero y organizativo de Ramón Sierra Cabrera a favor de la campaña de René Luis Rene Ruelas Ortega con expresiones certificadas sobre:

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL**

● ... en lo poquito o mucho que pude ayudarte, quiere, ahí estuvo los resultados, mi gente, mi gente estuvo bien puesta contigo René, quiero agradecer a la gente de la Loma, Juan Gilpreciado saben que mucha fuerza de gente de ahí, de Villa Corona...

● El (Luis Rene Rudas Ortega) sabía de las reuniones que tenía yo con grupos de Villa Corona... yo más bien le dije a mi gente porque no quería que se repitiera la historia de las porquerías del resto y en realidad va a suceder nuevamente con Villa Corona...

● ...Por eso optamos por ... el equipo de trabajo de este muchacho de René, empezando por él, no pudo haber otra mejor elección y decisión para el municipio de Villa Corona, gracias, gracias por confiar mi gente, mis amigos de Villa Corona. Gracias por haberme dado ese, esa confianza y que, por ustedes, porque ni modo que me diga que fui a

● Gracias por haberme dado esa confianza y que, porque ustedes, porque ni modo que me digan que fui a amenazados también a Villa Corona para que votaran por René, por favor, gracias, René, quiero hacer un compromiso contigo, me da mucho gusto y estoy contento que estés tú y no te preocupes... cuenta por mi gente o la gente que confió y te dio todo el apoyo y respaldo, también créeme que con mucho gusto por eso lo hago y porque Villa Corona tenga otras condiciones... hay que trabajar para nuestros municipios aledaños; porque así se genera un crecimiento o una detonación más a corto plazo, quiero hacer un compromiso contigo y con mi gente de Villa Corona que como presidente municipal de Acatlán de Juárez habrá una muy buena relación, esto te doy mi palabra desde este momento, pero lo más importante que quiero que ofrezca René, te quiero ofrecer todo el respaldo y el apoyo por parte del gobierno federal, que te lo puedo decir, gracias a Dios y que bueno que ganó quien hoy es presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, contamos con muy buenos amigos, cuenta con ello René, tú eres Independiente..., cuenta con eso, no estás solo, toda mi gente están brindándome el apoyo, con mucho gusto te los acercaré para que hagas para que nuestro municipio crezca...

Que el 19 de julio de 2018 se promovió la queja referida con 5 anexos por un presunto rebase de gastos de campaña del candidato independiente al gobierno municipal, Luis René Ruelas Ortega, quien resultó ganador en dicha elección; se promovió la queja para los efectos legales que corresponda, toda vez que se aportaron elementos de prueba conforme a las normas y Reglamentos vigentes en la materia, relativos al presunto hecho de superar gastos de campaña autorizados por la autoridad electoral competente en la elección municipal de Villa Corona Jalisco en 2018. Se anexa copia del acuse de recibido del escrito inicial presentado ante la Junta Local del INE en Jalisco y recibido por el C. Sergio David Carrillo Espinoza (anexo 1).

Que el escrito referido fue remitido a la maestra Erika Estrada Ruiz, directora de resoluciones y normatividad del INE por oficio INE-UTF-JAL-0195-2018 el 21 de junio de 2018 (anexo 2).

Que el documento fue remitido a la UTF de Guadalajara, Jalisco a la UTF en la ciudad de México por estafeta código de rastreo 2354321737 (anexo 3).

Que a la fecha no se ha recibido notificación alguna sobre el procedimiento referido.

Con relación a lo manifestado, solicito:

Primero. Tenga a bien informar a quien suscribe el expediente del caso o en su caso el acuerdo recaído al escrito inicial; tener por autorizado al C. Guillermo Ortiz Vázquez y Jesús Venegas Soriano, Yesenia Dueñas Q. y Enrique Flores para recibir notificaciones en la avenida La Paz 1901 colonia Americana en Guadalajara.

Segundo. De ser procedente, llevar a cabo las gestiones de su integración para los efectos legales que haya lugar.

(...)"

X. Solicitud de información sobre el procedimiento de queja identificado con clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL. El trece de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-UTF-JAL-0233-2018, el Enlace de Fiscalización del estado de Jalisco, remitió el escrito de fecha nueve de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual, la C. María del Rosario Copado Anzaldo, otrora candidata a la Presidencia Municipal de Villa Corona, Jalisco, postulada por el Partido Político Movimiento Ciudadano, ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco, solicitó información respecto al procedimiento de queja citado, manifestando lo siguiente: (Fojas de la 263 a la 238 del expediente).

" (...)

1. Que el 19 de julio de 2018 se promovió la queja referida con 5 anexos por un presunto rebase de gastos de campaña del candidato independiente al gobierno municipal, Luis René Ruelas Ortega, quien resultó ganador en dicha elección; se promovió la queja para los efectos legales que corresponda, toda vez que se aportaron elementos de prueba conforme a las normas y Reglamentos vigentes en la materia, relativos al presunto hecho de superar gastos de campaña autorizados por la autoridad electoral competente en la elección municipal de Villa Corona Jalisco en 2018. Se anexa copia del acuse de recibido del escrito inicial presentado ante la Junta Local del INE en Jalisco y recibido por el C. Sergio David Carrillo Espinoza (anexo 1)

2. Que el escrito referido fue remitido a la maestra Erika Estrada Ruiz, directora de resoluciones y normatividad del INE por oficio INE-UTF-JAL-0195-2018 el 21 de junio de 2018 (anexo 2)

3. Que el documento fue remitido a la UTF de Guadalajara, Jalisco a la UTF en la ciudad de México por estafeta código de rastreo 2354321737 (anexo 3)

4. Que a la fecha no se ha recibido notificación alguna sobre el procedimiento referido.

(...)"

XI. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.

a) El trece de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/1161/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la citada Dirección informe si al momento de respuesta del presente oficio existe reporte en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) de los gastos de campaña denunciados a través del escrito de queja. (Foja 275 del expediente).

b) El veintidós de agosto de dos mil dieciocho, el Director de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, mediante oficio número

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL

INE/UTF/DA/3089/2018, dio contestación al oficio descrito en el inciso anterior, manifestando lo que a continuación se expone:
(Fojas de la 275 a la 286 del expediente).

"(...)

Sobre el particular le informó que el sujeto obligado reporto mediante el SIF, la propaganda electoral detallada en el **Anexo Único** adjunto al presente oficio (...)

FECHA	DESCRIPCIÓN	GASTO PRESUMIBLE	REFERENCIA CONTABLE
29 de abril de 2018	<p>El 29 de abril, a las 0:12 horas, el candidato independiente a la alcaldía de Villa Corona, C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS", publicó en su página de Facebook, una imagen de Él, su logo y su nombre, donde señala lo siguiente: "INICIO DE CAMPAÑA DOMINGO 29 DE ABRIL DEL 2018 1:00 COLONIA OBRERA, ESTIPAC". HAGO NOTAR QUE EL EVENTO ANUNCIADO A REALIZAR, NO FUE REGISTRADO conforme a FORMATO "IC" -INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización).</p> <p>https://scontent.fqdl52fna.fbcdn.net/v/tl.0-9/31510835_2107300886213074_8786_082793470820352_n.jpg?ncat=O&oh=3262f2e23431f14a669f0f8Scbdd3434&oe=S</p> <p>BD3322B</p>	<p>Publicación en Facebook</p> <p>Logo</p>	No se localizó en la contabilidad
30 de abril de 2018	<p>El 30 de abril, en varios horarios señalo dos 0:00 y 12:43, el candidato a la alcaldía de Villa Corona, C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS"; a través de su página de Facebook, realiza una publicación referente a su arranque de campaña, de la cual se pueden apreciar varios elementos, consistentes 24 estandartes, 11 banderas, 28, camisas y 24 gorras, llevado a cabo en la delegación de Estipac, del Mpio de Villa Corona, Jal. A 28 km de distancia ida y vuelta en donde por lo menos debió de usar un vehículo para trasladarse y del cual debió de presentar un contrato de comodato y erogo un gasto de gasolina de lo cual debe de presentar la factura de esta con el proveedor autorizado ante el INE en tiempo y forma., de la publicación se aprecia la siguiente frase "Excelente arranque de campaña. La</p>	<p>24 estandartes</p> <p>11 banderas</p> <p>28 camisas</p> <p>24 gorras</p> <p>1 vehículo</p> <p>Gasolina</p>	<p>P2N/DR-1/31-05-18 (estandartes)</p> <p>P2C/DR-1/29-05-18 (banderas)</p> <p>P1N/EG-1/08-05-18 (camisas y gorras)</p>

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL**

	<p><i>Colonia Obrera es independiente!!</i>, actividad proselitista y utensilios de propaganda, no registrados y reportados conforme a la agenda de eventos políticos del INE atraes de su FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización).</p> <p>https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31488228_210779015616414_73522536098037235712_n.jpg?nc_cat=0&oh=d7b8cd8f160777d1f036d6113e4a738d&oe=SBDSCCDO</p>		<p>P2N/DR-3/14-06-18 (gasolina)</p> <p>Respecto al vehículo no se localizó registro del gasto en contabilidad.</p>
1 de mayo de 2018	<p>De la publicación que realiza el C. Luis Rene Ruelas Ortega "Rene Ruelas" se puede apreciar en la publicación que realiza respecto a su imagen de perfil político del cual podemos destacar el logo que lo distingue que es una manita y su apellido "Ruelas", así mismo dejo establecido que el día de referencia no fue agendada ante el INE PARA EL DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD PROSELITISTA CONFORME A LA AGENDA DE EVENTOS POLITICOS DE LA CUAL SE DEJA AQUÍ SU LIGA</p> <p>https://SIFine.mx/SIF_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=elsS</p> <p>Más de su logo y nombre dicho personaje político se da a conocer por la pinta de murales en bardas de las diversas calles en las delegaciones y en la cabecera municipal de Villa Corona, Jal. Violando flagrantemente las reglas del INE, a través de su FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización)</p> <p>http://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31720786_2108812589395237_6883627162851606528_n.jpg?nc_cat=0&oh=9dddfc21659dbca948b2ccee616fd5d2&oe=5BE4149E</p>	Pinta de murales en bardas	P2C/DR-3/29-05-18 (pintura para bardas)

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL**

	<p>Para la pretensión de la certificación y correspondiente fiscalización de los gastos y actos ya sean anticipados o durante campaña realizados por cuenta o mandato del candidato independiente a la alcaldía de Villa Corona, Jalisco, C. LUIS RENE RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS", me permito puntualizar varios elementos que así abandonan mi argumento, cito primeramente, que el referido candidato se dio a conocer por un logo de una manita así como de su nombre, junto con lo anterior la inserción de pinturas de diversas imágenes en forma de mural tales como a las de diversos colores, mariposas, personas, etc., en bardas de las diversas delegaciones así como de la cabecera municipal de Villa Corona, las cuales jamás reporto como cuenta de gastos, según FORMATO "CI" - INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización). Dichas imágenes las iré agregando al presente, para mejor comprensión y apreciación de la conducta irregular, reprochable, que despliego el candidato independiente a la alcaldía de Villa Corona, C. LUIS RENE RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS".</p> <p>De la publicación que realiza el C. LUIS RENE RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS" a más de su logo y nombre dicho personaje político se da a conocer por su pinta de bardas de las diversas calles en las delegaciones y en la cabecera municipal de Villa Corona, Jal. Violando flagrantemente las reglas del INE, a través de su FORMATO "CI" - INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización).</p> <p>http://scontent.fgdl.5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31720786_2108812589395237_6883627162851606528_n.jpg?nc_cat=0&oh=9dddfc21659dbca948b2ccee616fd5d2&oe=5BE4149e</p> <p>https://www.facebook.com/luisitin88?ref=br_rs</p>	Pinta de bardas	P2C/DR-3/29-05-18 (pintura para bardas)
4 de mayo de 2018	El día 4 de mayo de 2018, no agenda actividad alguna, lo cual resulta ser violatorio de	No cuantificable	No cuantificable

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL

	<p><i>los Lineamientos emitidos por el INE. Por consiguiente, al no ser registrado dicha actividad y gasto Conforme al FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL</i></p> <p><i>ORIGEN, MONTO V DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la</i></p> <p><i>página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización), la</i></p> <p><i>conducta del candidato es oscura, dolosa y en desventaja ya que es una actividad no</i></p> <p><i>registrada, es dolosa, ya que realiza actividades que no agenda conforme a los</i></p> <p><i>Lineamientos del INE conforme a FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL</i></p> <p><i>ORIGEN, MONTO V DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la</i></p> <p><i>página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización).</i></p>		
5 de mayo de 2018	<p><i>El día 5 de mayo de 2018, a las 17:33, el candidato independiente a la alcaldía de Villa Corona, Jalisco, C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS", subió a su cuenta de</i></p> <p><i>Facebook, actos proselitistas, de comunidad la cual no se describe, de la cual aquí se dejan fotografías, así como direcciones URL, de las cuales se desprende el uso de camisas con el logo del citado candidato, así como un tipo de saludadores en forma de manita. Esta conducta del citado candidato, genera en relación al resto de los competidores, una competencia desleal, ya que genera actividades y gastos que no reporta conforme a FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO V DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización). En donde se advierte un aproximado de 12 estandartes, 10 playeras, y un aproximado de 6 cachuchas, y que se llevó acabo en la delegación de Atotonilco Mpio. De Villa Corona, Jal. Que se encuentra a 22 Km de distancia ida y vuelta, en donde para trasladarse debió usar un automóvil del cual debe o debió registrar en sus gastos y contener un contrato de comodato y una factura de gasolina con los proveedores autorizados por el INE</i></p>	<p><i>Camisas con logo</i></p> <p><i>Saludadores de manita</i></p> <p><i>12 estandartes</i></p> <p><i>10 playeras</i></p> <p><i>6 gorras</i></p> <p><i>Vehículo</i></p> <p><i>Gasolina</i></p>	<p><i>P1N/EG-1/08-05-18 (camisas, playeras y gorras)</i></p> <p><i>P2N/DR-1/31-05-18 (estandartes)</i></p> <p><i>P2N/DR-3/14-06-18 (gasolina)</i></p> <p><i>Respecto al vehículo no se localizó registro del gasto en contabilidad.</i></p>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL

	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215802737917096&set=a.3834751462987.2167626.1103967893&tyoe=3		
6 de mayo de 2018	<p>El día 6 de mayo de 2018, a las 12:24 horas, el candidato independiente a la alcaldía de Villa Corona, Jalisco, C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS", subió a su cuenta de Facebook, actos proselitistas, de la visita que realizó a la comunidad El Barro, la cual no se encuentra registrada en la agenda conforme a FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización). De esto se advierte que dolosamente el referido candidato, realiza actividades de competencia desleal respecto del resto de los competidores, eroga gastos que oculta al INE, como bien lo dejó descrito en el presente a través de los diversos link y hashtag</p>	No cuantificable	No cuantificable
6 de mayo de 2018	<p>El recorrer las localidades de nuestro municipio me ha permitido conocer personas extraordinarias, ayer tuve la fortuna de saludar a la Sra. Luisa de la comunidad de El Barro y a pesar de su edad ella se siente y actúa como una persona joven llena de vida, buen humor y optimismo. Los buenos somos más y trabajaremos para mejorar las condiciones de todos. La cual no se encuentra registrada en la agenda conforme a FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización). En donde se advierte un aproximado de 3 estandartes, 3 playeras, y un aproximado de 1 cachuchas y 1 bandera y recorrió 32 Km ida y vuelta a esta delegación de lo cual no nuestro contrato de comodato de automóvil ni factura de gasolina ante los proveedores autorizados por el INE. De esto se advierte que dolosamente el referido candidato, realiza actividades de competencia desleal respecto del resto de los competidores, eroga gastos que oculta al INE, como bien lo dejó descrito en el presente a través de los diversos link y hashtag.</p> <p>https://scontent.fgdlS-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31958054_10215808405618785_2495049078950330368_n.jpg?ncat=O&oh=656cd3a43f36e48d02851c7ddffbee92&oe=SBE443AE</p>	<p>3 estandartes</p> <p>3 playeras</p> <p>1 gorra</p> <p>1 bandera</p> <p>Vehículo</p> <p>Gasolina</p>	<p>P2N/DR-1/31-05-18 (estandartes)</p> <p>P2C/DR-1/29-05-18 (banderas)</p> <p>P1N/EG-1/08-05-18 (camisas, playeras y gorras)</p> <p>P2N/DR-3/14-06-18 (gasolina)</p> <p>El gasto por concepto del uso del vehículo no se localizó en contabilidad.</p>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL

10 de mayo de 2018	<p>A través de la página de Facebook, el día 10 de mayo de 2018, el candidato independiente a la alcaldía de Villa Corona, Jalisco, C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS", publicó imágenes del evento que tuvo con motivo del día de las madres y, si bien es cierto que dicho acto fue reportado en la agenda del INE, no menos cierto lo es, que el costo de operación y logística, jamás lo reportó el referido candidato. Conforme a FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización).</p> <p>De las fotos que subió a su página de Facebook, puede apreciarse que el candidato en cuestión al presente procedimiento gastó dinero para rentar</p> <p>el local, donde llevó a cabo el evento del día de las madres; el local lo adorno con arreglos florales; se aprecia que hay varias mesas con</p> <p>manteles, lo cual puede presumirse que gasto dinero en la renta de dichos inmuebles; realizó un gasto para adorno floral de centro de mesa; asimismo se puede apreciar de las imágenes, el gasto en el consumo de vasos desechables, refrescos, así como unas botellas de algún tipo de bebida alcohólica.</p> <p>Rene Ruelas actualizó su foto del perfil.</p> <p>https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/tl.0-9/1351098910209177061</p> <p>893355786663371404449657n.jpg?nccat=O&oh=2501bf7a1d41</p> <p>https://scontent.fgdl5-2.fna.fbcdn.net/v/tl.0-9/13139152_102088507855</p> <p>62632_5396885071742060253_n.jpg?nccat=O&oh=707694c6a540630a</p> <p>056658e2b0f6c712&oe=5BABCEAF</p>	<p>Renta de local</p> <p>Adorno de flores</p> <p>Mesas</p> <p>Manteles</p> <p>Refrescos</p> <p>Vasos desechables</p> <p>Bebida alcohólica</p>	No se localizó en la contabilidad
12 de mayo de 2018	<p>Solo se dedica a subir un video de Migue de su equipo de la planilla registrada ante el INE a través de su cuenta de Facebook, del cual se desprende al final del mismo, la promoción respecto a su candidatura. El día de cuenta para los efectos que haya lugar no ser registrado conforme a la agenda tampoco los gastos que erogó. La conducta del candidato es oscura, ya que es una actividad no registrada, es dolosa, ya que realiza actividades que no agenda</p>	<p>Video editado para Facebook</p>	No se localizó en la contabilidad

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL

	<p>conforme a los Lineamientos del INE. Conforme al FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización). En donde abajo dejo el link y leyenda de su texto.</p> <p>https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/videos/2113926302217199/?t=32</p>		
13 de mayo de 2018	<p>A través de la página de Facebook, el día 13 de mayo de 2018, a las 10:45, el candidato independiente a la alcaldía de Villa Corona, Jalisco, C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS", de propia voz, informa lo que hizo el día anterior, esto es el 12 de mayo, advirtiéndose de esta publicación los siguientes elementos no reportados, banderas y sillas no reportadas, al igual la imagen fue tomada en la delegación de Estipac Mpio de Villa Corona, Jal. A 28 Km de distancia ida y vuelta, sin presentar contrato de comodato de automóvil ni gastos por gasolina conforme a FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización). - publicación: 11 de junio de 2018, 00:25, pública, muestra al candidato con trece personas más, las cuales se muestran uniformadas en su prenda superior. Publicado bajo el Link:</p> <p>https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216107638739426&set=a.4079369898295_2172416.1103967893&type=3&tbeater</p>	<p>Banderas</p> <p>Sillas</p>	<p>P2C/DR-1/29-05-18 (banderas)</p> <p>En cuanto a las sillas no se localizó en contabilidad.</p>
14 de mayo de 2018	<p>Pública, EL C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS", en donde muestra una imagen en donde narra los hechos que hizo un festival dedicado al 10 de mayo en un lugar en donde no muestra contrato de renta ni de comodato e igual el evento se realizó a 28 Km de distancia ida y vuelta en la delegación de Estipac Mpio de Villa Corona, Jal. Conforme a FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización).</p> <p>https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/pcb.2114896368786859/211489593212036/?type=3</p>	Vehículo	No se localizó en la contabilidad

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL

17 de mayo de 2018	<p><i>Pública, EL C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS", en donde muestra una imagen que estuvo en la delegación de Atotonilco el Bajo</i></p> <p><i>Mpio de Villa Corona, Jal., 22 Km de distancia ida y vuelta donde muestra gorras, cachuchas y estandartes sin llevar a cabo el seguimiento del a</i></p> <p><i>FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización).</i></p> <p><i>Publicado bajo el Link</i></p> <p><i>https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32792454_2116437478632748_18968384404461271040_n.jpg?_nc_cat=0&oh=1518da42d5ab3984f11e2cb1705a119&oe=5BA4A5D3</i></p>	<p>Gorras</p> <p>Estandartes</p>	<p>P1N/EG-1/08-05-18 (gorras)</p> <p>P2N/DR-1/31-05-18 (estandartes)</p>
18 de mayo de 2018	<p><i>Pública, EL C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS", en donde muestra una imagen que estuvo en la delegación de El Barrio de Guadalupe Mpio de Villa Corona, Jal., 32 Km de distancia ida y vuelta donde muestra a lo menos 1 manta de 12 Mts2, 22 cachuchas y a lo menos 21 estandartes, 24 camisetas sin llevar a cabo el seguimiento del a FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización).</i></p> <p><i>Publicado bajo el Link</i></p> <p><i>https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215908586243238&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3</i></p>	<p>1 manta 12 mts2</p> <p>22 gorras</p> <p>21 estandartes</p> <p>24 camisas</p>	<p>P2N/DR-1/31-05-18 (estandartes)</p> <p>P2C/DR-1/29-05-18 (banderas)</p> <p>P1N/EG-1/08-05-18 (camisas, playeras y gorras)</p>
24 de mayo de 2018	<p><i>EL C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS", en donde muestra una imagen que estuvo en la delegación de Estipac Mpio de Villa Corona, Jal., 28 Km de distancia ida y vuelta donde muestra a lo menos 3 bocinas con triple, 1 micrófono, 1 mesa, 35 sillas, 6 cachuchas, sin llevar a cabo el seguimiento del a FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización).</i></p> <p><i>Ya iniciamos con las reuniones de barrio, muy contentos de la asistencia y participación de las</i></p>	<p>3 bocinas con triple</p> <p>1 micrófono</p> <p>1 mesa</p> <p>35 sillas</p> <p>6 gorras</p>	<p>P1N/EG-1/08-05-18 (gorras)</p> <p>Los gastos operativos no se localizaron en contabilidad.</p>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL

	<p>personas del Barrio de la alberca en Juan Gil Preciado.</p> <p>Estás re ...</p> <p>Publicado bajo el Link</p> <p>https://www.facebook.com/ReneRuelasvc/photos/pcb.2119s3952</p>		
28 de mayo de 2018	<p>EL C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS", en donde muestra una imagen que estuvo en el Mpio de Villa Corona, Jal., un día antes donde muestra a lo menos audio, 1 micrófono, 150 sillas, 20 cachuchas, 15 estandarte, 16 banderas, 70 playeras en color blanco y negro, 1 escenario, 1 Lona de 5Mt2, sin llevar a cabo el seguimiento del a FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO V DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización).</p> <p>https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/33778966_10215989607348715_8361733801218408448_n.jpg?_nc_cat=0&oh=dd8a711dlf70239</p> <p>f88664f8e8f4ffc8e&oe=SBDSBAOC</p> <p>https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/33923623_10215989608</p> <p>428742_5819944409956876288_n.jpg?_nc_cat=0&oh=8f17c32c3c6f9e20</p> <p>547884a90958c41S&oe=SBA6F277</p> <p>https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/33720290_10215989607748725_882178500_9766531072_n.jpg?_nc_cat=0&oh=0b5b00131f85014f925784f45efc37ee&oe=5BA50462</p>	<p>1 micrófono</p> <p>150 sillas</p> <p>20 gorras</p> <p>15 estandartes</p> <p>16 banderas</p> <p>70 playeras blanco y negro</p> <p>1 escenario</p> <p>1 lona 5 mts2</p>	<p>P2N/DR-1/31-05-18 (estandartes)</p> <p>P2C/DR-1/29-05-18 (banderas)</p> <p>P1N/EG-1/08-05-18 (camisas, playeras y gorras)</p> <p>Los gastos operativos no se localizaron en contabilidad.</p>
11 de junio de 2018	<p>Publicación: 11 de junio de 2018, 00:56, pública, EL C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS", muestra un video de una avanzada, donde se aprecian dos docenas de banderas del logo del candidato, se escucha una banda tipo militar fue realizado en Estipac, Jal a 28 Km de distancia de ida y vuelta sin presentar contrato de comodato de automóvil ni gastos por gasolina, conforme a FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO V DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de</p>	<p>Banderas</p> <p>Vehículo</p> <p>Gasolina</p>	<p>P2C/DR-1/29-05-18 (banderas)</p> <p>P2N/DR-3/14-06-18 (gasolina)</p> <p>El vehículo no se localizó en la contabilidad</p>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL

	<p>Fiscalización).</p> <p>https://www.facebook.com/luisitin88/yjdeos/10216107750982232/</p>		
11 de junio de 2018	<p>Publicación: 11 de junio de 2018, 19:27, EL C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS", pública, muestra al candidato con once personas más, las cuales se muestran uniformadas en su prenda superior, más dos docenas de banderas del logo del candidato. Conforme a FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización).</p> <p>Publicado bajo el Link:</p> <p>https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216113337761898&set=a.3834751462987.2167626.1103967893&type=3&theater</p>	<p>Camisas</p> <p>Banderas</p>	<p>P1N/EG-1/08-05-18 (camisas y playeras)</p> <p>P2C/DR-1/29-05-18 (banderas)</p>
11 de junio de 2018	<p>Publicación: 11 de junio de 2018, 21:13, estatus público, a través de su página EL C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS", publico en</p> <p>diversos horarios 21:13, 19:27, 00:56, faltado a las reglas conforme a FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y</p> <p>DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización) de Facebook el candidato. De las imágenes que aquí se muestran se puede</p> <p>apreciar en varios horarios al menos lo siguiente:</p> <p>9 Banderas de 5 mts2, 5 estandartes, 30 banderas, 10 playeras en color negro, 5 playeras en color blanco en cada horario más haciendo mención que son con personas diferentes, 100 sillas, 5 bocinas, 1 Micrófono De 150 a 200 cachuchas, distancia a 28 km ida y vuelta, en delegación Estipac, falta de contrato de comodato y reporte de gastos de gasolina.</p>	<p>9 banderas 5 mts2</p> <p>5 estándares</p> <p>30 banderas</p> <p>10 playeras negras</p> <p>5 playeras blancas</p> <p>100 sillas</p> <p>5 bocinas</p> <p>1 micrófono</p> <p>150 a 200 gorras</p> <p>Vehículo</p> <p>Gasolina</p>	<p>P2C/DR-1/29-05-18 (banderas)</p> <p>P2N/DR-1/31-05-18 (estandartes)</p> <p>P1N/EG-1/08-05-18 (camisas, playeras y gorras)</p> <p>P2N/DR-3/14-06-18 (gasolina)</p> <p>El gasto por uso del vehículo y</p> <p>los gastos operativos del evento no se localizaron en contabilidad.</p>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL

12 de junio de 2018	<p>Publicación: 12 de junio de 2018, 09:30, EL C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS", estatus público, a través de su página de Facebook el candidato. Conforme a FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de</p> <p>Fiscalización.</p>	<p>20 camisetas con su logotipo</p> <p>Vehículos</p>	<p>P1N/EG-1/08-05-18 (camisas, playeras)</p> <p>El gasto por concepto del uso vehículo no se localizó en contabilidad.</p>
13 de junio de 2018	<p>Publicación: 13 de junio de 2018, 15:09, estatus público, a través de su página de Facebook el candidato. EL C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS", estatus público, a través de su página de Facebook el candidato. Sin tomar en cuenta las reglas del FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización y que por lo menos 300 sillas en 6 eventos en lugares diferentes, 1 mesa, refrigerio, 5 bocinas, 1 micrófono.</p>	<p>300 sillas</p> <p>1 mesa</p> <p>Refrigerio</p> <p>5 bocinas</p> <p>1 micrófono</p>	<p>No se localizó en la contabilidad</p>
19 de junio de 2018	<p>Publicación: 19 de junio de 2018, 12:04, EL C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS", estatus público, a través de su página de Facebook el candidato. Sin tomar en cuenta las reglas del FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización Publicadas las imágenes bajo el Link:</p> <p>https://www.facebook.com/ReneRuelasVC/posts/2135635396712956</p> <p>Desprendiéndose de las imágenes publicadas por el candidato, el uso de una lámpara de alumbrado en exteriores, aparato de sonido y audio, camisas promocionales, sillas y refrigerios para asistentes. También dan cuenta de la realización de por lo menos tres eventos de campañas distintos, como puede observarse de los entornos en las imágenes, como puede ser uno, el suelo de los distintos lugares.</p>	<p>Lámpara</p> <p>Equipo de sonido</p> <p>Camisas</p> <p>Sillas</p> <p>Refrigerios</p>	<p>P1N/EG-1/08-05-18 (camisas, playeras)</p> <p>P2C/DR-2/29-05-18 (equipo de sonido)</p> <p>La lámpara, las sillas y refrigerios no se localizaron en contabilidad.</p>
20 de junio de 2018	<p>20 JUNIO 2018 a las 17:33 horas, el candidato independiente a la alcaldía de Villa Corona, Jalisco, C. LUIS RENÉ RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS", publicó en su cuenta de Facebook, una entrevista que le realizaron en canal 21, el cual se encuentra en la ciudad de Zacoalco de Torres, Jalisco, con una distancia de 70 km ida y vuelta, para lo cual me permito realizar una puntuación muy precisa, el</p>	<p>Vehículo</p> <p>Gasolina</p>	<p>P2N/DR-3/14-06-18 (gasolina)</p> <p>El vehículo no se localizó en la contabilidad</p>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL

	candidato, realizó un gasto de traslado y actividad proselitista sin reportarlo, conforme al FORMATO "IC"-INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema de Integral de Fiscalización). Con lo anterior, se aprecia el dolo del candidato al esconder información al Instituto Nacional Electoral, información que bien sabe le es perjudicial, en cuanto a los gastos en su tope de campaña. Tales aseveraciones se encuentran en los links.		
	JUNIO 2018 El C. LUIS RENE RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS" publica una imagen a través de su página de Facebook. Sin tomar en cuenta al INE conforme a las reglas del FORMATO "IC" –INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización), de la cual se puede apreciar al menos lo siguiente: 80 sillas, 2 estandartes, 10 camisetas color negro con logo de Ruelas, esto fue en la delegación de Juan Gil Preciado Mpio de Villa Corona, Jal. Con una distancia de 13 Km en donde a lo menos uso un vehículo para transportarse con un contrato de comodato y gasolina para el vehículo. Publicadas de la imagen del link de abajo: http://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/36002659_2139835289626300_3897661079995547648_n.jpg?_nc_cat=0&oh=7d033d6c2017fa290aaea06df8fcbdb&oe=5BA7A5F5	80 sillas 2 estandartes 10 playeras Vehículo Gasolina	P2N/DR-1/31-05-18 (estandartes) P1N/EG-1/08-05-18 (camisas, playeras) P2N/DR-3/14-06-18 (gasolina) Las sillas y el vehículo no se localizaron en contabilidad
23 de junio de 2018	34 estandartes, 44 playeras, 22 cachuchas http://www.facebook.com/ReneRuelasVC/photos/pcb.2139835452959617/2139834786293017/?type=3	34 estandartes 44 playeras 22 cachuchas	P2N/DR-1/31-05-18 (estandartes) P1N/EG-1/08-05-18 (camisas, playeras y gorras)
24 de junio de 2018	El C. LUIS RENE RUELAS ORTEGA, "RENE RUELAS", publica un video a través de su página de Facebook. Sin tomar en cuenta al INE conforme a las reglas del FORMATO "IC" –INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización) de la cual se puede apreciar al menos lo siguiente: 1 manta de 12 Mts2, 50 banderas de 3 Mts2, 8 estandartes, 50 playeras	1 manta 12 mts 50 banderas de 3 mts 8 estandartes 50 playeras	P2N/DR-1/31-05-18 (estandartes) P1N/EG-1/08-05-18 (camisas, playeras y gorras) P2C/DR-1/29-05-18 (banderas)

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL**

	<p>color negro. Publicadas de las imágenes del video del link de abajo.</p> <p>http://www.facebook.com/ReneRuelasVC/videos/2141274539482375/</p>		
25 de junio de 2018	<p>Publicación: 25 de junio de 2018, 11:39, el estatus público, a través de su página de Facebook el candidato. Publicadas las imágenes bajo el link:</p> <p>http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216230480690398&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3&theater</p> <p>Desprendiéndose de las imágenes publicadas por el candidato, el uso de una lámpara de alumbrado en exteriores, aparato de sonido y audio, camisas promocionales, sillas y refrigerios para asistentes.</p> <p>Es importante, que esta H. Autoridad en materia electoral, tenga conocimiento, del dolo con el que se ha venido desenvolviendo el candidato independiente a la alcaldía de Villa Corona, Jalisco, C. Luis Rene Ruelas Ortega "Rene Ruelas", esto lo digo así, debido a que el multicitado candidato dolosamente y muy a su conveniencia, no reporto, no agendo del 29 de abril al 8 de mayo, así como los días 11, 14, 15, 16 de mayo, todos del presente año 2018, hecho realizado por el referido candidato, el cual sabía bien que se encontraba violando disposiciones electorales.</p>	Lámpara	No se localizó en la contabilidad
01 de julio de 2018	<p>01 de julio de 2018 a las 22:51 Has. El C. LUIS RENE RUELAS ORTEGA "RENE RUELAS" publica una foto a través de su página de Facebook de la cual se puede apreciar al menos 20 banderas, 2 mantas aproximadamente 10 mts2 cada una, 4 estandartes y otros elementos que no se pueden apreciar por la obscuridad de la noche, conducta típica violatoria de la veda electoral. Sin tomar en cuenta y la agenda de actividades del INE conforme a las reglas del FORMATO "CI" –INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS, el cual se encuentra visible en la página oficial del INE, a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización).</p> <p>Publicadas las imágenes bajo el Link:</p> <p>http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216294268805061&set=a.4079369898295.2172416.1103967893&type=3</p> <p>René Ruelas 01 de julio a las 22:51</p>	<p>20 banderas</p> <p>2 mantas de 10 mts</p> <p>4 estandartes</p>	<p>P2C/DR-1/29-05-18 (banderas)</p> <p>P2N/DR-1/31-05-18 (estandartes)</p>

	<i>Muchas gracias por la confianza de todo el municipio, se decía que la elección iba a ser cerrada y la tendencia indica que ganamos con una buena diferencia. Estamos muy contentos por vernos favorecidos por el voto pero también estamos conscientes del gran reto que tenemos que es sacar adelante a nuestro municipio. ¡Nuestro municipio es independiente!!!!</i>		
--	--	--	--

XII. Razones y Constancias.

a) El veinte de agosto de dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia a efecto de realizar la búsqueda y verificación de 22 eventos de los cuales presuntamente se generaron gastos no reportados; al respecto, esta Unidad Técnica de Fiscalización concluyó que dentro del Sistema de Fiscalización (SIF), se encontró el registro de los gastos por concepto de lona, logos, estandartes, camisas, playeras, gorras, combustible y sonido; asimismo se encontró el registro de los eventos previamente mencionados, por lo que esta autoridad deduce que los gastos de campaña derivados de los eventos denunciados fueron registrados a través del perfil del C. Luis Rene Ruelas Ortega, otrora candidato independiente a Presidente Municipal de Villa Corona, Jalisco. (Fojas 287 a la 294 del expediente).

XIII. Solicitud de información a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos.

a) El veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/42562/2018, se solicitó determinar de manera pormenorizada por cada uno de los videos que se anexaron a la presente solicitud, si cada uno de éstos son susceptible o no de ser considerados como un gasto de producción, de igual forma, se solicitó señalaran los elementos técnicos que se advierten de la reproducción de los videos. (Fojas 299 y 300 del expediente).

b) El treinta de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio número INE/DEPPP/DE/DATE/5793/2018, la Dirección citada, dio contestación a lo solicitado en el oficio descrito en el inciso anterior, manifestando lo siguiente: (Fojas de la 301 a la 304 del expediente).

“(...)

En relación a los numerales 1 y 2, se informa que para el análisis del material enviado se determinaron las siguientes características:

- **Calidad de video para transmisión Broadcast:** Manejo de resolución, códecs tasa de bit rate y tipo de compresión para poder ser radiodifundidos.
- **Producción:** probable uso de alguno de los siguientes equipos: semi-profesionales o profesionales de producción como son: Cámaras de foto o video semi-profesionales a profesionales, Iluminación, microfónica semi-profesional a profesional, grúas, do//y cam, steady cam, dron, entre otros.
- **Manejo de imagen:** calidad de imagen, encuadres, movimiento de cámaras, definición, uso de imágenes de stock, locaciones.
- **Audio:** Calidad de grabación, locutores, jingles, mezcla de audios.
- **Gráficos:** Diseño, animaciones, calidad de los mismos.
- **Post-producción:** Edición, efectos, mezcla de efectos y animaciones con imagen probable uso de equipo de edición de audio y video semi-profesional a profesional.
- **Creatividad:** Uso de guion y contenidos.

(...)"

XIV. Solicitud de información al Despacho de la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral.

a) El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, mediante el oficio número INE/UTF/DRN/1202/2018, se solicitó la certificación de cada una de las URL's que se adjuntaron en el oficio de referencia. (Fojas de la 305 a la 309 del expediente).

b) El veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/3112/2018, remitió original del acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/1514/2018, la cual consta de sesenta y ocho fojas y un disco compacto debidamente certificado. (Fojas de la 317 a la 384 del expediente).

XV. Solicitud de intervención de la Dirección de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, recibió la solicitud de intervención signada por la C. María del Rosario Copado Anzaldo, solicitando lo que a continuación se expone: (Fojas de la 384 a la 393 del expediente).

"(...)

De estas disposiciones constitucionales señaladas, para efectos del presente caso, se advierte que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, recibió un escrito de queja acreditando los requisitos de ley, con la petición de resolver en tiempo y forma, bajo el supuesto de que se acreditaba un rebase de gastos de campaña en la campaña del candidato independiente del

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL

municipio de Villa Corona, Jalisco en 2018; el C. Luis René Ruelas Ortega incurrió en un supuesto legal que la ley prevé sancionar en caso de acreditarse ante la autoridad competente. A la fecha de presentación del presente recurso, se advierte que no hay avance significativo en la sustanciación del procedimiento referido, en el que la autoridad sin justificación alguna, evidencia que resolverá la queja en una fecha incierta, abriendo la posibilidad de incurrir en un acto de reparación imposible para los efectos del Proceso Electoral en curso, circunstancia que daña derechos de terceros.

Manifiesto que el contenido del expediente de queja INE/Q-00E-UTF/666/2018/JAL permite advertir que fue contestada por el denunciado Luis René Ruelas Ortega, el día 15 de agosto de 2018 y que al día 22 de agosto de 2018 (fecha de consulta del expediente) han pasado 7 siete días sin que por parte de la UTF haya avance relevante alguno en la sustanciación de la queja; si se toma en cuenta que el plazo límite para resolver por parte de la autoridad electoral es el 10 de septiembre de 2018, conforme al código electoral vigente, se advierte que la Unidad Técnica de Fiscalización pretende resolver el caso en fecha incierta, habiendo dejado atrás tanto el plazo para resolver las inconformidades en materia electoral promovidas con motivo de la elección municipal en Jalisco en 2018 (resolución que depende sustancialmente de lo que determine el Consejo General del INE al respecto) dejando el caso con una reparación imposible y convirtiendo el caso en improcedente para la justicia electoral, toda vez que la justicia electoral difícilmente podría emitir resolución alguna en fecha posterior a la toma de posesión de las autoridades electas en el Proceso Electoral de 2018. En tal circunstancia, se solicita a la autoridad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien es autoridad competente tratándose de resoluciones del Consejo General del INE en materia de fiscalización a partidos y candidatos en los procesos electorales del país (federales y locales) Por tales argumentos válidamente razonados, es que solicitó al tribunal electoral del poder judicial de la federación acuerde la presente petición por ser de urgente y necesaria resolución, a efecto de instruir a la Unidad Técnica de Fiscalización por medio de su director, el C. LIZANDRO NÚÑEZ PICAZO a efecto de que se resuelva en el tiempo idóneo la queja presentada en materia de fiscalización relativa la elección en Villa Corona Jalisco de 2018 y remita en breve término a la Comisión de Quejas el Proyecto de Resolución que habrá de acordar el Consejo General del INE en el expediente INE/Q-00E-UTF/666/2018/JAL.

De igual forma, se analice el caso y ordene abrir un procedimiento sancionador interno que determine la responsabilidad en contra de quien o quienes omitieron cumplir el procedimiento debido para el caso, pretenden obstruir la justicia electoral en el ámbito administrativo y mantienen su intención de dejar en estado de indefensión a las partes incurriendo en una situación de imposible reparación.

En estas consideraciones solicito a su amable autoridad:

PRIMERO: Acuerde e instruya al personal a cargo de sustanciar la queja referida a efecto de que a Ja brevedad se formule Proyecto de Resolución al caso del expediente señalado y se proceda para que el Consejo General del INE emita la resolución definitiva, tomando en cuenta que el 10 de septiembre de 2018 es el plazo para que los juicios de inconformidad interpuestos ante la justicia electoral local queden resueltos, siendo el caso de que la resolución de la presente queja tiene conexidad con la inconformidad de la que conoce para resolver el Tribunal Electoral del Poder Judicial del estado de Jalisco.

SEGUNDO: Toda vez que la queja señalada fue interpuesta en tiempo para ser resuelta con el informe consolidado relativo a los informes sobre gastos de campaña fiscalizados por la UTF en la elección ordinaria de Jalisco en 2018, proceda a deslindar responsabilidades e imponer las sanciones correspondientes si encuentra causa para ello, toda vez que se pretende dejar en indefensión a las partes contendientes inconformes con la actuación de algunos actores en materia de fiscalización de la que la UTF es autoridad competente; de igual forma, se sancione por

pretender obstruir la justicia electoral en el presente caso, toda vez que la resolución que emita el Consejo General en el expediente señalado, está íntimamente conectada con el fondo a resolver de la queja.

(...)"

XVI. Solicitud de información al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

a) El tres de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio número INE/UTF/DRN/43038/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó girar sus apreciables instrucciones a quién corresponda, a efecto que informará, bajo qué régimen se constituyó la citada Asociación Civil denominada "Villa Corona Antigua", asimismo se solicitó la remisión de la documentación relacionada con la constitución de la citada Asociación Civil y por último se solicitó la remisión de los CFDI expedidos para la citada Asociación Civil en el periodo comprendido del 09 de diciembre de 2017 al 27 de junio de 2018. (Fojas 397 y 398 del expediente).

b) Mediante oficio 103-05-05-2018-0223, la Administradora de Evaluación de Impuestos Internos 5, dio respuesta al requerimiento de información, señalando que, derivado de la búsqueda realizada, la persona moral "Villa Corona Antigua", no fue localizada como contribuyente

XVII. Solicitud de información a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

a) El cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio número INE/UTF/DRN/43039/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, le solicitó a dicha autoridad, remitiera la documentación presentada por el C. Luis René Ruelas Ortega, al momento de solicitar su registro como Aspirante a Candidato Independiente, al cargo de Presidente Municipal de Villa Corona, Jalisco, con la cual acreditó la creación de la asociación civil denominada "Villa Corona Antigua".

b) El siete de septiembre del dos mil dieciocho mediante oficio 7265/2018, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, dio respuesta al requerimiento de información.

XVIII. Vista por posibles actos anticipados de campaña a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

a) El cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio número INE/UTF/DRN/43049/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, dio vista a la referida autoridad sobre diversos actos anticipados de campaña difundidos a través de la red social "Facebook.

b) A la fecha de la presente Resolución no se ha obtenido respuesta alguna.

XIX. Requerimiento de información al Presidente Municipal de Villa Corona, Jalisco.

a) Mediante oficio número INE-JAL-JLE-VE-2198-2018 el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco del Instituto Nacional Electoral, de fecha primero de septiembre de dos mil dieciocho, requirió al C. Rodolfo Rubalcaba Muñoz, Presidente Municipal de Villa Corona, Jalisco informará y remitiera eventos enlistados con anterioridad, fueron llevados a cabo por el C. Luis René Ruelas Ortega, informará si dicho ciudadano realizó pago alguno al Municipio de Villa Corona, Jalisco, por la realización de los eventos enlistados en los lugares señalados; de ser el caso, remitiera los contratos, facturas, recibos y muestras de cada uno de los servicios utilizados para la realización de los eventos de referencia así como de la propaganda electoral utilizada, precisando la fecha de celebración de los contratos respectivos, así como toda aquella documentación que acredite su dicho, precisando si el pago de cada prestación o servicio se realizó en una sola exhibición o en varios pagos, indicando el monto y forma de pago de las operaciones y por último realizará las aclaraciones que a su derecho corresponda.

b) A la fecha de la presente Resolución no se ha obtenido respuesta alguna.

XX. Requerimiento de información a la C. María del Rosario Copado Anzaldo, otrora candidata a la Presidencia Municipal de Villa Corona, Jalisco, por el Partido Movimiento Ciudadano.

a) Mediante oficio número INE-JAL-JLE-VE-2197-2018 el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco del Instituto Nacional Electoral, de fecha primero de septiembre de dos mil dieciocho, requirió a la C. María del Rosario Copado Anzaldo, otrora candidata a la Presidencia Municipal de Villa Corona, Jalisco, por el Partido Movimiento Ciudadano, aportara mayores elementos a esta autoridad fiscalizadora, que hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, lo anterior por cuanto hace a los lugares donde presuntamente se llevaron a cabo los eventos denunciados.

b) A la fecha de la presente Resolución no se ha obtenido respuesta alguna.

XXI. Acuerdo de Alegatos. El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, por lo cual se ordenó notificar al quejoso y al sujeto incoado, para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que consideran convenientes.

XXII. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General Electoral del Instituto Nacional Electoral.

a) El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/43420/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General Electoral del Instituto Nacional Electoral, manifestara por escrito los alegatos que considera convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado.

b) A la fecha de la presente Resolución no se ha obtenido respuesta alguna.

XXIII. Notificación de alegatos al C. Luis René Ruelas Ortega, otrora candidato independiente, postulado al cargo de Presidente Municipal de Villa Corona, Jalisco.

a) Mediante Acuerdo al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco del Instituto Nacional Electoral, de fecha treinta de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a la otrora candidata referida, manifestara por escrito los alegatos que considera convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado.

b) Mediante escrito de fecha ocho de septiembre de dos mil dieciocho, el otrora candidato, dio contestación a lo solicitado en el inciso anterior, manifestando lo siguiente:

“ (...)

EXPONGO

Con fundamento en mi calidad de Candidato Electo con notificación de fecha 10 de agosto del presente año a las 18:10 horas y en contestación al procedimiento presentado, a efectos de aclarar y desmentir las acusaciones realizadas manifiesto:

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL**

OTRORA CANDIDATO INDEPENDINETE. - Por el municipio de Villa Corona en el marco del Proceso Electoral 2017-2018 en el Estado de Jalisco. El que suscribe la presente contestación para los efectos legales a que haya lugar, LUIS RENE RUELAS ORTEGA, candidato electo al gobierno municipal por la vía independiente en Villa Corona, Jalisco, en el Proceso Electoral 2017-2018, con el carácter que tengo debidamente acreditado ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, del cual anexo constancia de mayoría.

DOMICILIO DE OTRORA CANDIDATO INDENDIENTE. - El anteriormente señalado.

ACTO IMPUGNADO. - el presente procedimiento, por ser parte.

De los hechos manifestados. –

1.- Tal y como la quejosa lo refiere mediante Acuerdo emitido, de la Convocatoria de elecciones ordinarias por el H. Congreso del estado de Jalisco el pasado 1 de septiembre del año 2017, acuerdo IEPC-ACG-087/2017 en el que se definieron las bases adherentes a dicho proceso en nuestro estado, para la elección de gobernador, diputados y presidentes municipales, el suscrito quede debidamente acreditado como candidato por la vía independiente de acuerdo a la normatividad referida.

2.- En virtud del pasado Proceso Electoral inmediato en el Estado de Jalisco y de acuerdo a los Lineamientos emitidos por Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, LUIS RENE RUELAS ORTEGA, quede como candidato electo al gobierno municipal por la vía independiente en Villa Corona, Jalisco, en el Proceso Electoral 2018, lo cual acreditado mediante constancia de mayoría en copia simple emitida por el instituto mencionado.

3.- Tal y como se desprende del escrito de queja del presente recurso, ofertado por la C. María del Rosario Copado Anzaldo, en el que argumenta que los comicios electorales 2018, comenzaron el 29 de abril del 2018, negamos rotundamente los acontecimientos o actos como ella lo menciona, como A) Actos anticipados de campaña, B) Actividades no agendadas ante el INE, y C) Gastos no reportados al INE.

De acuerdo a lo siguiente:

A) Actos anticipados de campaña, en lo que refiere a la actividad proselitista que se demanda con respecto a las publicaciones difundidas en la llamada Facebook con fechas 8, 13 y 18 de marzo, 01, 11, 21 y 22 de abril, todos del año 2018, por lo anteriormente aludido se niega rotundamente lo manifestado por la quejosa. Ya que dichos actos, eventos a los que hace alusión, de lo que es importante destacar fueron realizados por miembros de una red social denominada "villa corona antigua" de la red Facebook, la cual tiene por objeto, rescatar y promover las costumbres y tradiciones, así como la de preservar y conservar la cultural del municipio de villa corona, un grupo social sin fin de lucro.

B) Actividades no agendadas ante el INE.

Con respecto a este punto, el candidato electo con constancia de validez de mayoría, hizo entrega a la autoridad competente de todos y cada una de las actividades agendadas conforme el programa del proceso de campaña, establecido por el equipo de trabajo según las necesidades y recursos que se presentaron y así quedo manifestado en el Reporte de Catalogo auxiliar de eventos de campaña ordinaria 2017-2018, presentadas ante el sistema integral de fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Presentando fechas en las que el equipo decidió no realizar actividades.

C) Gastos no reportados al INE.

Con respecto al contenido manifestado dentro del presente inciso, lo que la quejosa preténde es sorprender la honorabilidad de la Unidad técnica de fiscalización toda vez que del contenido descrito se advierten y se aprecian inconsistencias e incongruencias de manera subjetiva y no cuantitativa, ya que solo refiere fechas, sin sustento y fundamento alguno. No existiendo una concatenación, lógica, jurídica y natural sobre los excesos de gastos, donde según ella advierte se rebasa el tope de campaña, haciendo mención que como ha quedado referido con anterioridad, la página de "villa corona antigua "es solo una red social y no una asociación civil como ella refiere; lo que deja ver clara su intención de confundir y opacar el proceso democrático de estos comicios electorales 2017-2018 en el municipio.

Que las bardas a las que hace alusión, las mismas, fueron realizadas bajo un concepto de arte urbano, con creatividad, trabajo y desempeño, propio de quienes integraron éste nuestro equipo de trabajo, ya que fuimos nosotros mismos, quienes realizamos y llevamos a cabo dicha actividad.

(...)"

XXIV. MEDIO DE IMPUGNACIÓN SOLICITADO POR LA C. MARÍA DEL ROSARIO COPADO ANZALDO ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CONTRA EL EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL.

a) El día veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, la Magistrada Gabriela del Valle Pérez, Presidenta de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acordó registrar como recurso de apelación con clave de expediente SG-RAP-257/2018, la solicitud presentada por la quejosa; asimismo se remitió dicho expediente a la ponencia del Magistrado Jorge Sánchez Morales.

b) El día seis de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió:

"PRIMERO. Se ***declara*** la existencia de la omisión impugnada.

SEGUNDO. Se ***ordena*** a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral proceda en términos de lo ordenado en la última parte del Considerando Tercero de la presente Resolución.

TERCERO. Se vincula a la Comisión de Fiscalización y al Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos precisados en la parte final del último considerando de la presente sentencia."

XXV. Cierre de instrucción. El diez de septiembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se declaró cerrada la instrucción correspondiente a la substanciación del Procedimiento de mérito.

Una vez sentado lo anterior, se procede a determinar lo conducente.

C O N S I D E R A N D O

1. Competencia. Con base en lo dispuesto por los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 5, numeral 2, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es **competente** para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General.

En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y k), y 191, numeral 1, incisos d) y g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.

Es relevante señalar que con motivo de la publicación llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General en sesiones extraordinaria y ordinaria celebradas el ocho de septiembre, dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete y

cinco de enero de dos mil dieciocho mediante Acuerdos INE/CG409/2017³; INE/CG614/2017⁴ e INE/CG04/2018 respectivamente, resulta indispensable determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable.

En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que dieron origen al procedimiento administrativo sancionador, esto es a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, así como al Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG04/2018.

2. Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado todos los documentos y actuaciones que integran el expediente que se resuelve, se desprende que el **fondo** del presente asunto consiste en determinar si el C. Luis Rene Ruelas Ortega, otrora candidato independiente, postulado al cargo de Presidente Municipal de Villa Corona, Jalisco, omitió reportar gastos utilitarios⁵, mismos que fueron destinados y utilizados para la realización de veintidós eventos; conductas que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de financiamiento de los partidos políticos, durante la campaña en el Marco del Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Jalisco.

En consecuencia, debe determinarse si el partido político y su candidato incumplieron con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos; y, 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

Ley General de Partidos Políticos.

“Artículo 79.

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes: (...)

b) Informes de campaña:

³ Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, aprobado mediante ACUERDO INE/CG263/2014, modificado a través de los acuerdos INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015, INE/CG320/2016, INE/CG875/2016 e INE/CG68/2017.

⁴ Acuerdo por el que se modifica el reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, aprobado el diecinueve de noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria del consejo general del instituto nacional electoral mediante el Acuerdo INE/CG264/2014, modificado a su vez con los Acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016.

⁵ Consistentes en estandartes, banderas, camisas, pinta de murales y bardas, saludadores, renta de inmueble, lámpara, refrigerios, gorras, vehículo, combustible, playeras, arreglos florales, mesas, manteles, escenario, sonido, vasos desechables, refrescos, botellas de bebidas alcohólicas, sillas, mantas, bocinas, tripie, logotipo (con una manita y con el nombre del denunciado).

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;”

Reglamento de Fiscalización

“Artículo 127.

Documentación de los egresos

- 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.*
- 2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.*
- 3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.”*

De las premisas normativas se desprende la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

Dichos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral.

En suma, los citados artículos señalan como supuestos de regulación los siguientes: 1) La obligación de los partidos políticos y candidatos de reportar sus ingresos y egresos para sufragar gastos de campaña, a través del informe respectivo; 2) la obligación de los sujetos obligados de atender los requerimientos

de información de la autoridad fiscalizadora; y 3) La obligación de los partidos políticos y candidatos de no rebasar los topes de gastos de campaña que la Autoridad, al efecto fije.

Así los preceptos citados tienen la finalidad de que los sujetos obligados cumplan cabalmente con el objeto de la ley, brindando certeza del destino de los recursos ejercidos en sus operaciones y que éstas no se realicen mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley, por lo tanto, la norma citada resulta relevante para la protección de los pilares fundamentales que definen la naturaleza democrática del Estado Mexicano.

Ahora bien, a efecto de efectuar un pronunciamiento individualizado, este Consejo General por cuestiones de método analizará los hechos denunciados en los siguientes apartados.

Apartado A. Actos Anticipados.

Apartado B. Omisión de reportar gastos de campaña

Apartado A. Actos Anticipados.

En este apartado, se advierte que mediante escrito de queja de fecha veintitrés de julio de la presente anualidad, presentado por la C. María del Rosario Copado Anzaldo, otrora candidata a la Presidencia Municipal de Villa Corona, Jalisco, postulada por el Partido Político Movimiento Ciudadano, ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en contra del C. Luis René Ruelas Ortega, otrora candidato independiente por el mismo Municipio, en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Jalisco, se denunciaron presuntos gastos no reportados, así como la realización de diversos **actos anticipados de campaña** difundidos a través de la red social Facebook, por lo que en el hecho marcado con el número 3 del escrito de queja, derivado de lo anterior y en virtud de que la autoridad sustanciadora no es competente para conocer y pronunciarse de actos anticipados de campaña, la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco, para que dentro de sus atribuciones determinará lo que a derecho procediera.

En virtud de lo expuesto previamente, el cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/43049/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización dio vista a la referida autoridad, a efecto de que está se pronunciará sobre posibles actos anticipados de campaña denunciados en el escrito de queja de mérito, para

que de ellos se desprendiera lo concerniente al origen, monto, aplicación y destino de los recursos derivados del financiamiento del sujeto obligado; solicitando que una vez resuelto el asunto y el mismo haya causado estado, se haga del conocimiento a este Consejo General, con la intención de determinar lo que en derecho corresponda en materia de fiscalización de los recursos.

B. Omisión de reportar gastos de campaña

En este apartado, se estudiarán los conceptos de gastos denunciados por el quejoso en su escrito inicial, en el cual, para sostener sus afirmaciones aporta un total de 91 fotografías, de las cuales, 25 de ellas corresponden a diversos actos anticipados, 6 fotografías las cuales, presuntamente, se atañen a la realización de números actos no agendados y 60 fotografías relacionadas con actos proselitistas y gastos no reportados; con dichas fotografías, el quejoso pretende probar la realización de los supuesto eventos, así como el gasto realizado con motivo de los mismos.

Es importante mencionar que, del análisis al escrito de queja inicial, se observa que el denunciante pretende generar una convicción errónea en esta autoridad, ya que la quejosa sostiene que el C. Luis Rene Ruelas Ortega, otrora candidato independiente por el municipio de Villa Corona, Jalisco; únicamente reportó un total 12 (doce) operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización, que representan un total de \$26,000.00 (veintiséis mil pesos 00/MN.) por concepto de ingresos, y \$16,837.40 (dieciséis mil ochocientos treinta y siete pesos 40/MN.) por concepto de gastos.

Sin embargo, la autoridad fiscalizadora localizó el reporte en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) un total de 15 (quince) operaciones por un total de \$62,694.40 (sesenta y dos mil seiscientos noventa y cuatro pesos 40/MN.) por concepto de ingresos, y \$53,531.80 (cincuenta y tres mil quinientos treinta y un pesos 80/MN.) por concepto de gastos. Siendo la cantidad señalada por la quejosa en monto que sólo corresponde a un registro llevado a cabo en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) el día 8 de mayo del presente año. Cabe señalar que el análisis detallado de todas y cada una de las operaciones realizadas durante el periodo de campaña fueron analizadas en el Dictamen Consolidado, así como en la Resolución de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la Revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los Candidatos Independientes a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Jalisco, la cual se aprobó en el Acuerdo INE/CG1126/2274.

Ahora bien , continuando con el estudio de los hechos denunciados, es importante mencionar que, las fotografías relacionadas en el párrafo que antecede, constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de administrarse con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto, su valor es indiciario.

Sirve para sustentar lo anterior la Jurisprudencia 4/2014⁶, emitida por la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, mediante la cual se determinó que: *“las pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un carácter imperfecto debido a la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que las mismas resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que pudieran contener, de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser administradas, que las puedan corroborar o perfeccionar la veracidad y existencia de los hechos que se pretenden acreditar con éstas”*.

De este modo, ésta autoridad electoral con base en las facultades de vigilancia y fiscalización y toda vez que se denunciaron gastos que deben ser reportados por el sujeto denunciado en su informe respectivo, procedió a notificar el inicio del procedimiento de mérito y a emplazar al C. Luis René Ruelas Ortega, otrora candidato independiente, postulado al cargo de Presidente Municipal de Villa Corona, Jalisco mediante oficio INE-JAL-VE-2112-2018, mismo que fue signado por la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, la cual fue la encargada de llevar a cabo dicha diligencia.

Al respecto, el trece de agosto de dos mil dieciocho, el otrora candidato independiente, postulado al cargo de Presidente Municipal de Villa Corona, Jalisco, dio respuesta al oficio de notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento



⁶ **PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.** - De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser administradas, que las puedan perfeccionar o corroborar.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL



materia de la presente Resolución, negando rotundamente se haya tenido un gasto de campaña por la cantidad que menciona la quejosa, manifestando que su campaña fue realizada y apegada al concepto de austeridad que marcaban sus principios y valores como grupo independiente. Ahora bien, respecto a los gastos no reportados, declaró que existen inconsistencias e incongruencias de manera subjetiva y no cuantitativa, ya que solo refiere fechas, sin sustento y fundamento alguno; no habiendo concatenación, lógica, jurídica y natural sobre los excesos de gastos, donde a decir de la quejosa se advierte un rebase al tope de gastos de campaña.

A efecto de continuar con la línea de investigación y así poder corroborar el registro de eventos de los cuales presuntamente se generaron gastos no reportados por concepto de **estandartes, banderas, camisas, pinta de murales y bardas, saluadores, renta de inmueble, lámpara, refrigerios, gorras, vehículo, combustible, playeras, arreglos florales, mesas, manteles, sonido, vasos desechables, refrescos, botellas de bebidas alcohólicas, sillas, mantas, bocinas, tripie, logotipo (con una manita y con el nombre del denunciado)**, se procedió a efectuar una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con la finalidad de detectar el registro de los conceptos especificados anteriormente, para lo cual, la autoridad electoral en fecha veinte de agosto de dos mil dieciocho, levantó razón y constancia de la búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), en específico en el ID de la contabilidad número 50702, perteneciente al perfil del denunciado, marcado con el ámbito local, en la entidad de Jalisco.

A continuación, se detallan los resultados obtenidos:



No.	Fecha	Evento Denunciado	Ubicación	Pruebas aportadas por el denunciante	Documentación localizada en el SIF	Agenda de Eventos
1	29 de abril de 2018	Inicio de campaña	Colonia Obrera, Estipac	-Logo	<u>Póliza número 1. Diario. P2.</u> Lonas y Logos para campaña. 	Fue objeto de observación en el Dictamen del informe de ingresos y gastos de campaña
2	30 de abril de 2018	Arranque de campaña	Delegación de Estipac	-Estandartes -Banderas -Camisas -Gorras -Vehículo -Gasolina	<u>Póliza número 1. Diario. P2.</u> Lonas y Logos para campaña. <u>Póliza número 1. Diario. P2.</u> <u>Corrección.</u> Aportaciones en especie de simpatizante banderas.  <u>Póliza número 1. Egreso. P1.</u> <u>Normal</u> Pago Factura gorras, playeras y calcas.	

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL



No.	Fecha	Evento Denunciado	Ubicación	Pruebas aportadas por el denunciante	Documentación localizada en el SIF	Agenda de Eventos
					<p><u>Póliza número 2. Diario. P2, Normal</u> Combustible para visita a delegaciones.</p> <p><u>Póliza número 3. Diario. P2, Normal</u> Combustible para visita a delegaciones.</p>	
3	1 de mayo de 2018	Publicación	Facebook	-Logo -Pinta de murales en bardas	<p><u>Póliza número 1. Diario. P2, Lonas y Logos para campaña.</u></p>  <p><u>Póliza número 3. Aportación en especie</u> simpatizante pintura para bardas.</p>	
4	5 de mayo de 2018	Actos proselitistas	Delegación de Atotonilco	-Camisas con logo -Saludadores de manita -Estandartes -Playeras -Gorras -Vehículo -Gasolina	<p><u>Póliza número 1. Egreso. P1, Normal</u> Pago Factura gorras, playeras y calcas.</p> <p><u>Póliza número 1. Diario. P2, Lonas y Logos para campaña.</u></p> <p><u>Póliza número 2. Diario. P2, Normal</u> Combustible para visita a delegaciones.</p> <p><u>Póliza número 3. Diario. P2, Normal</u> Combustible para visita a delegaciones.</p>	Fue objeto de observación en el Dictamen del informe de ingresos y gastos de campaña
5	6 de mayo de 2018	Recorrido a localidades	Comunidad de El Barro	-Estandartes -Playeras -Gorra -Bandera -Vehículo -Gasolina	<p><u>Póliza número 1. Diario. P2, Lonas y Logos para campaña.</u></p> <p><u>Póliza número 1. Egreso. P1, Normal</u> Pago Factura gorras, playeras y calcas.</p> <p><u>Póliza número 1. Diario. P2, Corrección.</u> Aportaciones en especie de simpatizante banderas.</p>  <p><u>Póliza número 2. Diario. P2, Normal</u> Combustible para visita a delegaciones.</p> <p><u>Póliza número 3. Diario. P2, Normal</u> Combustible para visita a delegaciones.</p>	
6	10 de mayo de 2018	Día de las madres	Inmueble arrendado (sin identificarse)	El quejoso aporta como elemento probatorio un link, el cual redirecciona al perfil de Facebook del C. Luis René Ruelas Ortega, al ingresar a dicho link se localiza la	N/A	Si reportado en la agenda de eventos como no oneroso Identificador del evento: 00002 ⁷

⁷ Por lo que respecta al evento identificado con el **No. 6**, es menester señalar que el quejoso en su escrito inicial, únicamente aporta como elemento probatorio un link que remite a una fotografía la cual, al ser analizada se determinó que no aporta elementos ni circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan por a esta autoridad contar con mayores elementos de prueba que vinculen el contenido de la misma con un presunto beneficio a favor del entonces candidato denunciado o en su caso, circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitieran a esta autoridad determinar la existencia de conductas que vulneren disposiciones en materia de fiscalización; por lo que, del escrito de queja no se advierten mayores elementos de prueba que concatenados entre sí generaran convicción a esta autoridad en cuanto a los hechos que pudieran desprenderse de estas.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL


No.	Fecha	Evento Denunciado	Ubicación	Pruebas aportadas por el denunciante	Documentación localizada en el SIF	Agenda de Eventos
				<p>imagen que a continuación se inserta:</p>  <p>Con dicha imagen el quejoso pretende acreditar los gastos denunciados por concepto de; renta de local, adorno de flores, mesas, manteles, refrescos, vasos desechables y bebida alcohólica, ahora bien, del análisis de la imagen aportada se desprende que ésta, se trata únicamente de una prueba técnica la cual no aporta elementos de convicción que hagan verosímil los hechos denunciados. Lo anterior, toda vez que el denunciante se limitó a ofrecer pruebas técnicas, de cuyo análisis y estudio, no es posible determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los supuestos hechos y conceptos denunciados, ni que éstos tengan un vínculo o relación con los denunciados, ni mucho menos que los mismos hayan significado un beneficio a la campaña del entonces candadito a Presidente Municipal incoado</p>		
7	12 de mayo de 2018	Publicación de promoción	Facebook	-Video editado para Facebook	N/A	Si reportado Identificador del evento: 00003
8	13 de mayo de 2018	Publicación en Facebook	Delegación de Estipac	-Banderas -Sillas	<p><u>Póliza número 1. Diario. P2. Corrección.</u> Aportaciones en especie de simpatizante banderas.</p> 	Si reportado Identificador del evento: 00004
9	14 de mayo de 2018	Festival del día de las madres	Delegación de Estipac		N/A	Fue objeto de observación en el Dictamen del informe

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL

No.	Fecha	Evento Denunciado	Ubicación	Pruebas aportadas por el denunciante	Documentación localizada en el SIF	Agenda de Eventos
						de ingresos y gastos de campaña. ⁸
10	17 de mayo de 2018	Visita	Delegación de Atotonilco el Bajo	-Gorras -Estandartes	<u>Póliza número 1. Diario. P2.</u> Lonas y Logos para campaña. <u>Póliza número 1. Egreso. P1. Normal</u> Pago Factura gorras, playeras y calcas.	Si reportado ** Identificador del evento: 00005
11	18 de mayo de 2018	Visita	Delegación de El Barrio de Guadalupe	-Manta -Gorras -Estandartes -Camisas	<u>Póliza número 1. Diario. P2.</u> Lonas y Logos para campaña. <u>Póliza número 1. Egreso. P1. Normal</u> Pago Factura gorras, playeras y calcas.	Si reportado Identificador del evento: 00006
12	24 de mayo de 2018	Visita	Delegación de Estipac	-Bocinas con tripie -Micrófono -Mesa -Sillas -Gorras -Combustible	<u>Póliza número 1. Egreso. P1. Normal</u> Pago Factura gorras, playeras y calcas. <u>Póliza número 2. Aportación en especie simpatizante sonido para eventos.</u> <u>Póliza número 2. Diario. P2. Normal</u> Combustible para visita a delegaciones. <u>Póliza número 3. Diario. P2. Normal</u> Combustible para visita a delegaciones.	Si reportado** Identificador del evento: 00012
13	28 de mayo de 2018	Visita	Municipio de Villa Corona Jalisco	-Micrófono -Sillas -Gorras -Estandartes -Banderas -Playeras -Escenario -Lona	<u>Póliza número 2. Aportación en especie simpatizante sonido para eventos.</u> <u>Póliza número 1. Egreso. P1. Normal</u> Pago Factura gorras, playeras y calcas. <u>Póliza número 1. Diario. P2. Corrección.</u> Aportaciones en especie de simpatizante banderas.  <u>Póliza número 1. Lonas y Logos para campaña.</u>	Si reportado Identificador del evento: 00016
14	11 de junio de 2018	Avanzada	Delegación de Estipac	-Banderas -Vehículo -Gasolina -Logo	<u>Póliza número 1. Diario. P2. Corrección.</u> Aportaciones en especie de simpatizante banderas.  <u>Póliza número 2. Diario. P2. Normal</u> Combustible para visita a delegaciones.	Si reportado Identificador del evento: 00030

⁸Para mayor referencia se puede consultar el Dictamen Consolidado, así como la Resolución INE/CG1126/2018, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral Respecto de las Irregularidades Encontradas en el Dictamen Consolidado de la Revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los Candidatos Independientes a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos, Correspondiente Al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Jalisco. <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/97880>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL

No.	Fecha	Evento Denunciado	Ubicación	Pruebas aportadas por el denunciante	Documentación localizada en el SIF	Agenda de Eventos
					<p><u>Póliza número 3. Diario. P2.</u> <u>Normal</u> Combustible para visita a delegaciones.</p> <p><u>Póliza número 1. Diario. P2.</u> Lonas y Logos para campaña.</p>	
15	11 de junio de 2018	Publicación	Facebook	-Camisas -Banderas	<p><u>Póliza número 1. Egreso. P1.</u> <u>Normal</u> Pago Factura gorras, playeras y calcas.</p> <p><u>Póliza número 1. Diario. P2.</u> <u>Corrección.</u> Aportaciones en especie de simpatizante banderas.</p> 	Si reportado Identificador del evento: 00030
16	11 de junio de 2018	Publicación	Delegación de Estipac	-Banderas -Estándares -Playeras -Sillas -Bocinas -Micrófono -Gorras -Vehículo -Gasolina	<p><u>Póliza número 1. Egreso. P1.</u> <u>Normal</u> Pago Factura gorras, playeras y calcas.</p> <p><u>Póliza número 1. Diario. P2.</u> <u>Corrección.</u> Aportaciones en especie de simpatizante banderas.</p> <p><u>Póliza número 2. Diario. P2.</u> <u>Normal</u> Combustible para visita a delegaciones.</p> <p><u>Póliza número 3. Diario. P2.</u> <u>Normal</u> Combustible para visita a delegaciones.</p> <p><u>Póliza número 2. P1. Corrección.</u> Aportación en especie simpatizante sonido para eventos.</p>	Si reportado Identificador del evento: 00030
17	12 de junio de 2018	Publicación	Facebook	-Camisetas -Vehículos	<p><u>Póliza número 1. Egreso. P1.</u> <u>Normal</u> Pago Factura gorras, playeras y calcas.</p>	Si reportado Identificador del evento: 00031
18	13 de junio de 2018	Publicación	Facebook	-Sillas -Mesa -Refrigerio -Bocinas -Micrófono	<p><u>Póliza número 2. P1. Corrección.</u> Aportación en especie simpatizante sonido para eventos</p>	Si reportado Identificador del evento: 00032
19	19 de junio de 2018	Publicación	Facebook	-Lámpara -Equipo de sonido -Camisas -Sillas -Refrigerios	<p><u>Póliza número 2. P1. Corrección.</u> Aportación en especie simpatizante sonido para eventos</p> <p><u>Póliza número 1. Egreso. P1.</u> <u>Normal</u> Pago Factura gorras, playeras y calcas.</p>	Si reportado Identificador del evento: 00038
20	20 de junio de 2018	Entrevista canal 21	Ciudad de Zocoalco de Torres	-Vehículo -Gasolina	<p><u>Póliza número 2. Diario. P2.</u> <u>Normal</u> Combustible para visita a delegaciones.</p> <p><u>Póliza número 3. Diario. P2.</u> <u>Normal</u> Combustible para visita a delegaciones.</p>	Si reportado ** Identificador del evento: 00039 o 00040
21	23 de junio de 2018	Publicación	Delegación de Juan Gil Preciado	-Sillas -Estandartes -Playeras -Vehículo -Gasolina -Cachuchas	<p><u>Póliza número 1. Diario. P2.</u> Lonas y Logos para campaña.</p> <p><u>Póliza número 1. Egreso. P1.</u> <u>Normal</u> Pago Factura gorras, playeras y calcas.</p> <p><u>Póliza número 2.</u> Combustible para visita a delegaciones.</p>	Si reportado Identificador del evento: 00043

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL

No.	Fecha	Evento Denunciado	Ubicación	Pruebas aportadas por el denunciante	Documentación localizada en el SIF	Agenda de Eventos
					Póliza número 3. Combustible para visita a delegaciones.	
22	24 de junio de 2018	Publicación	Facebook	-Manta -Banderas -Estandartes -Playeras	Póliza número 1. Diario. P2. Lonas y Logos para campaña. Póliza número 1. Diario. P2. Corrección. Aportaciones en especie de simpatizante banderas. Póliza número 1. Egreso. P1. Normal Pago Factura gorras, playeras y calcas.	Si reportado Identificador del evento: 00044
23	25 de junio de 2018	Publicación	Facebook	-Lámpara Desprendiéndose de las imágenes publicadas por el candidato, el uso de una lámpara de alumbrado en exteriores, aparato de sonido y audio, camisas promocionales , sillas y refrigerios para asistentes. ⁹	Póliza número 1. Egreso. P1. Normal Pago Factura gorras, playeras y calcas. Póliza número 2. Aportación en especie simpatizante sonido para eventos.	Si reportado en la agenda de eventos. Reunión de Barrio, no oneroso. Identificador del evento: 00045
24	01 de julio de 2018	Publicación	Facebook	-Banderas -Mantas -Estandartes	Póliza número 1. Diario. P2. Lonas y Logos para campaña. Póliza número 1. Diario. P2. Corrección. Aportaciones en especie de simpatizante banderas.	


Ahora bien, es importante señalar que las fotografías y la documentación proporcionada por la quejosa, constituyen documentales públicas y pruebas técnicas en términos de los artículos 16, numeral 1 y 17 numeral 1, del Reglamento de Procedimientos en materia de Fiscalización, que en concordancia con el artículo 21, numeral 3, del citado reglamento, al ser adminiculadas entre sí y con la razón y constancia levantada por el Director de la Unidad de Fiscalización respecto de la información arrojada por el Sistema Integral de Fiscalización; hace prueba plena, por lo que los gastos denunciados por concepto de **lonas, logos, banderas, estandartes, camisas, playeras, gorras, combustible, pinta bardas micrófono y sonido**, fueron reportados a través del **ID CONTABILIDAD: 50702** perteneciente al perfil del denunciado, marcado con el ámbito local, en la entidad de Jalisco, mediante el Sistema Integral de Fiscalización; **por tanto no se desprende omisión alguna por parte del denunciado.**

No obstante, y previo al registró del gasto por concepto de pinta de bardas, esta autoridad estima pertinente, hacer constar que dicha conducta fue realizada bajo concepto de “arte urbano” con creatividad, trabajo y desempeño, propio de quienes integraron el equipo de trabajo del otrora candidato; asimismo, dicho concepto fue declarado en el informe de ingresos y gastos de campaña, el cual fue reportado como una donación por simpatizantes.

⁹ Por cuanto hace a los gastos denunciados por concepto de lámparas, sillas y refrigerios, éstos se estudian en párrafos subsecuentes.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL

Al respecto de las bardas denunciadas esta autoridad determino lo siguiente:

Ubicación (Barda denunciada)	Descripción de la barda	Observaciones
Calle Morelos, entre la calle Guadalupe Victoria y Cuauhtémoc, en el centro de la población de Villa Corona, Jalisco	Barda con tonalidades de color azul, amarillo oro y blanco; asimismo se aprecia al parecer una fábrica y al lado izquierdo de la misma palmeta un templo trazado con líneas color blanco.	De la prueba técnica aportada en el escrito de queja; se advierte que esta autoridad no cuenta con mayores elementos de prueba que vinculen el contenido de las mismas con un presunto beneficio a favor del sujeto denunciado.
Calle 5 de mayo, entre la calle Lerdo de Tejada y carretera a Barra de Navidad en la colonia Centro del mismo municipio de Villa Corona, Jalisco.	Barda en la que se aprecian cuatro personas alzando una bandera la cual está la cual está trazada en línea negra, al lado derecho de las personas en signos de admiración se encuentra la leyenda "¡Levantemos Villa Corona!". Al lado derecho sobre fondo negro se muestran dos pares de alas, la primera con las puntas hacia arriba y la segunda con las puntas hacia abajo, en tonalidades de amarillo oro, dos tonalidades de azul, blanco y rosa mexicano; siguiendo el mismo orden a mano derecha, en la parte superior de las bardas se percibe en signos de admiración la leyenda "¡Salvemos Villa Corona!".	La pinta de barda quedó registrada a través de la póliza número 3, de la cual se desprende la siguiente descripción: Aportación en especie simpatizante pintura para bardas. 
Calle Lerdo de Tejada, entre las calles 5 de Mayo y Cuauhtémoc, en la colonia Centro, del municipio Villa Corona, Jalisco.	En la barda se puede apreciar dos partes en que se dividió la misma con una línea curva, la parte superior de la barda en dos tonalidades de color azul, la parte inferior en color blanco con círculos azules y en escalas de grises y negro se observa una persona que está pintando al parecer un mensaje "UN FUTURO MEJOR".	De la prueba técnica aportada en el escrito de queja; se advierte que esta autoridad no cuenta con mayores elementos de prueba que vinculen el contenido de las mismas con un presunto beneficio a favor del sujeto denunciado.
Calle Lerdo de Tejada, entre las calles 5 de Mayo y Cuauhtémoc, en la colonia Centro, del municipio Villa Corona, Jalisco.	A unos cuantos metros se encuentra otra barda en la que se aprecia que sobre un fondo de color blanco se escribió la palabra "Se libre", se observa una persona sujetando un objeto que parece ser un cierre que se está abriendo y dentro se puede ver una pintura que demuestra un río, árboles, vegetación, montañas, el cielo, todo en colores azul, amarillo, café, naranja, gris, verde.	De la prueba técnica aportada en el escrito de queja; se advierte que esta autoridad no cuenta con mayores elementos de prueba que vinculen el contenido de las mismas con un presunto beneficio a favor del sujeto denunciado.
Calle Emiliano Zapata, entre las calles Aldama y Agustín de Iturbide en la colonia Atotonilco el Bajo, delegación Villa Corona, Jalisco.	En la barda, se aprecia un fondo blanco y sobre el fondo blanco la imagen de un ángel en tonalidades con escalas de grises, negros, verdes, azules y rosa palo, así como una imagen al parecer una lupa.	De la prueba técnica aportada en el escrito de queja; se advierte que esta autoridad no cuenta con mayores elementos de prueba que vinculen el contenido de las mismas con un presunto beneficio a favor del sujeto denunciado.
Calle Progreso, entre las calles Agustín de Iturbide y Aldama en la colonia Atotonilco el Bajo, delegación Villa Corona, Jalisco.	En la barda, se aprecia un fondo blanco y sobre el fondo blanco del lado izquierdo en tonalidades de grises y negros se aprecia una imagen de una persona saltando, en la parte inferior de la barda un rectángulo de color azul; continúa la barda con fondo blanco y sobre el fondo blanco del lado derecho hacia el izquierdo una persona que sujeta un cierre que al parecer se está cerrando y dentro se puede ver un ala en las tonalidades café, azul, verde y rosa.	De la prueba técnica aportada en el escrito de queja; se advierte que esta autoridad no cuenta con mayores elementos de prueba que vinculen el contenido de las mismas con un presunto beneficio a favor del sujeto denunciado.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL

Calle Igualdad, entre las calles Agustín de Iturbide y Arroyo, en la colonia Atotonilco el Bajo, delegación Villa Corona, Jalisco.	En la barda se aprecia de izquierda a derecha primeramente un cuadro en color negro sobre el que se encuentran dos pares de alas, la primera de ellas con las puntas hacia arriba y la segunda con las puntas hacia abajo, ambas en tonalidades de amarillo oro, dos tonalidades de azul, blanco y rosa mexicano. Luego, en tonalidades de color a escalas de negros y grises, blanco, azul verdes y rosas, se aprecian cuatro personas alzando una bandera la cual está trazada en línea negra, al lado superior derecho de las personas en signos de admiración se encuentra la leyenda "¡Levantemos Atotonilco!".	La pinta de barda quedó registrada a través de la póliza número 3, de la cual se desprende la siguiente descripción: Aportación en especie simpatizante pintura para bardas. 
Calle Abasolo, entre El Tajo y Reforma, en la colonia Atotonilco el Bajo, delegación Villa Corona, Jalisco.	Barda en la que se aprecian dos imágenes, la primera de un niño recargado sobre sus brazos cruzados, la cual se aprecia en tonalidades de grises y negros, una lupa y destellos en tono azul, la segunda la figura de unas alas en tonalidades de negro, verde, amarillo oro, grises y morado.	De la prueba técnica aportada en el escrito de queja; se advierte que esta autoridad no cuenta con mayores elementos de prueba que vinculen el contenido de las mismas con un presunto beneficio a favor del sujeto denunciado.
Carretera Buenavista-Cocula y Tecuan, en Villa Corona, Jalisco.	Barda que expone una imagen sobre un fondo blanco de un niño recargado sobre sus brazos cruzados, en tonalidades de grises y negros, una lupa y destellos en tono azul, y una franja en tonalidad azul marino.	De la prueba técnica aportada en el escrito de queja; se advierte que esta autoridad no cuenta con mayores elementos de prueba que vinculen el contenido de las mismas con un presunto beneficio a favor del sujeto denunciado.
Carretera Buenavista-Cocula, entre Buenavista e Hidalgo, delegación del mismo municipio de Villa Corona, Jalisco.	En la barda que ahí se encuentra, un fondo blanco con círculos azules, se aprecia una persona dibujada en tonos grises, negros y azules que al parecer está escribiendo en letras mayúsculas en color azul marino la palabra "BUENAVISTA".	De la prueba técnica aportada en el escrito de queja; se advierte que esta autoridad no cuenta con mayores elementos de prueba que vinculen el contenido de las mismas con un presunto beneficio a favor del sujeto denunciado.
Calle Echeverría y Carretera Buenavista-Cocula en la delegación Buenavista, del municipio de Villa Corona, Jalisco.	Barda en donde se aprecia una imagen de unas alas extendidas en tonalidades de color amarillo, verde, azul, rosa y negro y en la parte inferior del lado izquierdo se aprecia el estandarte de una mano y la palabra "RUELAS".	La pinta de barda quedó registrada a través de la póliza número 3, de la cual se desprende la siguiente descripción: Aportación en especie simpatizante pintura para bardas. 
Calle 5 de Mayo, entre la calle Ramón Corona y Carretera Buenavista-Cocula, del municipio de Villa Corona, Jalisco.	Barda en la que se percibe una persona saltando sobre un fondo blanco de la cual se aprecia en tonalidades de grises y negros, con destellos en tono azul.	De la prueba técnica aportada en el escrito de queja; se advierte que esta autoridad no cuenta con mayores elementos de prueba que vinculen el contenido de las mismas con un presunto beneficio a favor del sujeto denunciado.
Calle Hidalgo por la entrada al Tecuán, esquina a la vuelta de la cancha de fútbol, en la localidad el Tecuán, del municipio de Villa Corona, Jalisco.	Barda en la que se aprecian dos tonalidades de color azul, blanco, escalas de grises y negro. En la parte superior derecha se lee la frase "¡Se libre!" y casi al final de la pintura se aprecia una persona que parece estar escribiendo la palabra "Tecuan!".	De la prueba técnica aportada en el escrito de queja; se advierte que esta autoridad no cuenta con mayores elementos de prueba que vinculen el contenido de las mismas con un presunto beneficio a favor del sujeto denunciado.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL

Calle Hidalgo a un costado de la unidad deportiva El Tecuán, del municipio de Villa Corona, Jalisco.	Barda que expone una imagen de unas alas extendidas en tonalidades de color amarillo, verde, azul, rosa, y café, unos círculos en tonos azules y en la parte superior de las alas tiene la frase ¡Salvemos el Tecuán!	La pinta de barda quedó registrada a través de la póliza número 3, de la cual se desprende la siguiente descripción: Aportación en especie simpatizante pintura para bardas.
Calle Hidalgo, hacia las 4 esquinas y calle 8 de Marzo, en la colonia Estipac, del municipio de Villa Corona, Jalisco.	Barda se aprecian dos tonalidades en escalas de grises, negros, café, amarillo, azul y verde; también se aprecia sobre el fondo de color blanco se escribió la palabra "Se libre" a una persona sujetando al parecer un objeto de lo cual parte de menos a mayor apreciando una pintura que demuestra un río, árboles, vegetación, montañas. el cielo	La pinta de barda quedó registrada a través de la póliza número 3, de la cual se desprende la siguiente descripción: Aportación en especie simpatizante pintura para bardas.
Calle López Cotilla, entre las calles 8 de Marzo y las 4 esquinas, del municipio de Villa Corona, Jalisco.	Barda en fondo blanco con una imagen de unas alas extendidas en tonalidades de color amarillo, verde, azul, rosa, y café, unos círculos en tonos azules y en la parte superior de las alas tiene la frase ¡Salvemos Estipac!.	De la prueba técnica aportada en el escrito de queja; se advierte que está autoridad no cuenta con mayores elementos de prueba que vinculen el contenido de las mismas con un presunto beneficio a favor del sujeto denunciado.
Calle Juárez, entre las calles Zaragoza y Estipac, en la colonia Estipac del mismo municipio que nos ocupa.	Barda que se encuentra se aprecia en tonalidades de escalas de grises y negro, círculos en color azul, fondo blanco.	De la prueba técnica aportada en el escrito de queja; se advierte que está autoridad no cuenta con mayores elementos de prueba que vinculen el contenido de las mismas con un presunto beneficio a favor del sujeto denunciado.
Calle Hidalgo, por la entrada principal a un lado de una tienda de abarrotes y auto lavado, en la colonia Estipac del municipio que nos ocupa.	Barda se aprecia en tonalidades de escalas de negros y grises la cual describo que una primera parte de la barda esta fondeada en blanco en la cual resalta una mano, la segunda esta fondeada en color negro resaltando dos pares de alas, una con las puntas hacia arriba y la otra puntas hacia abajo en colores rosa, blanco, dos tonalidades de azul, negro, amarillo oro y verde, de esta imagen parte superior se aprecia un mensaje que dice "Salvemos La Colonia"	La pinta de barda quedó registrada a través de la póliza número 3, de la cual se desprende la siguiente descripción: Aportación en especie simpatizante pintura para bardas.
Calle 16 dieciséis de septiembre, (carretera Estipac-Carretera Barra de Navidad) entre las calles J. Ortiz de Domínguez y Juan Gil; en el mismo municipio.	Barda que se aprecia una imagen sobre un fondo blanco de una persona la cual se aprecia en tonalidades de grises y negros, una lupa y destellos en tono azul, y a lado derecho se observa la imagen de una persona que está escribiendo en la parte superior tiene la palabra "Juan Gil".	De la prueba técnica aportada en el escrito de queja; se advierte que está autoridad no cuenta con mayores elementos de prueba que vinculen el contenido de las mismas con un presunto beneficio a favor del sujeto denunciado.
Calle 16 dieciséis de septiembre, (carretera Estipac-Carretera Barra de Navidad) entre las calles J. Ortiz de Domínguez y Juan Gil; en el mismo municipio.	Barda que aquí expone se aprecia que esta fondeada en color blanco en la cual resalta la imagen de tres personas levantando una bandera la cual trae como símbolo el estandarte de una mano y la palabra "RUELAS" en la parte superior derecha aparece el símbolo de# y el lema "soy independiente" al centro de la imagen se aprecia el estandarte de una mano y por debajo se alcanza apreciar la palabra "RUELAS" así como a un costado derecho el lema "Salvemos Estipac" a lado izquierdo de la imagen se puede apreciar de izquierda a derecha la palabra "RUELAS" seguida de una mano en tonalidades grises y negros que en su centro se dibuja a su vez el estandarte de una mano en tonalidades de azul y negro, a lado derecho de la imagen que se describió tiene la leyenda "Yo Soy Libre" seguida del símbolo # con la leyenda "Soy Independiente".	La pinta de barda quedó registrada a través de la póliza número 3, de la cual se desprende la siguiente descripción: Aportación en especie simpatizante pintura para bardas.
Calles Soledad Ochoa y Cerrada Fusto T. Rodríguez, en el mismo municipio.	La barda que ahí se expone en dos fondos el primero en color blanco del cual resalta la imagen de una persona que según con fondeada en color blanco en la cual resalta una imagen de una	De la prueba técnica aportada en el escrito de queja; se advierte que está autoridad no cuenta con mayores elementos de prueba que vinculen el contenido de las mismas

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL

	<p>imagen que se está imaginando un templo, donde en la parte superior de la imagen hay un lema "¡ SE LIBRE " a lado izquierdo de la imagen se aprecia varios círculos de diferentes tamaños y un rectángulo todos en color azul: la segunda imagen está en fondo negro del cual resalta unas alas en tonalidades azul, verde, amarillo oro, negro y gris.</p> <p>A si mismo se aprecia al fondo de la pintura una persona que está pintando al parecer un mensaje "UN FUTURO MEJOR" se aprecian unos círculos en color azul. la parte superior de la pintura es color azul la inferior es color blanco y en esta parte se aprecia que con pintura blanca se cubrió la imagen de una mano y las palabras "RUELAS" "#SOY INDEPENDIENTE".</p>	con un presunto beneficio a favor del sujeto denunciado.
--	---	--

Por cuanto hace a los eventos denunciados, el otrora candidato, registró los eventos correspondientes a los días 10, 12, 13, 17, 18, 24 y 28 de mayo; 11, 12, 13, 19, 20, 23, 24 y 25 de junio, todos de la presente anualidad, sin embargo; cabe mencionar que, en el informe de ingresos y gastos de campaña, se observó en el Dictamen correspondiente, que el incoado omitió reportar tres eventos en la agenda de actos públicos del 29 de abril, así como 5 y 14 de mayo, todos correspondientes al año en curso, los cuales se sancionaron en la Resolución ya mencionada, aprobada en el Acuerdo INE/CG1126/2274.¹⁰

Aunado a lo anterior, esta autoridad electoral estima pertinente, hacer mención que el día treinta de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió a la C. María del Rosario Copado Anzaldo, otrora candidata a la Presidencia Municipal de Villa Corona, Jalisco, por el Partido Movimiento Ciudadano, para que aportara mayores elementos a efecto de hacer verosímil la versión de los hechos denunciados por cuanto hace a los lugares donde presuntamente se llevaron a cabo los eventos denunciados.

En este contexto, del cuadro anterior se advierte que dichos conceptos de gastos fueron registrados ante la autoridad fiscalizadora y por lo tanto no existe incumpliendo a la normatividad electoral por parte del otrora candidato independiente.

Ahora bien, por cuanto hace a los supuestos eventos denunciados llevados a cabo los días 29 y 30 de abril, 1°, 5, 6 y 14 de mayo, así como el 1° de julio, todos de la presente anualidad; asimismo respecto a los supuestos gastos no reportados por concepto de **lámparas, sillas, vehículo y refrigerios**, esta autoridad no cuenta con mayores elementos de prueba que vinculen el contenido de las mismas con un

¹⁰ <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/browse?value=INE%2FCG1126%2F2018&type=govdoc>

presunto beneficio a favor del sujeto denunciado; del mismo modo y derivado del análisis integral realizado al expediente en estudio; no se desprendieron elementos que permitirán a esta autoridad determinar la existencia de conductas que vulneren disposiciones en materia de fiscalización; por lo que del escrito de queja no se advierten mayores elementos de prueba que concatenados entre sí generen convicción a esta autoridad en cuanto a los hechos que pudieran desprenderse de estas.

Por otro lado, se adjuntan las pruebas técnicas aportadas por la quejosa respecto a los eventos que se mencionan a continuación:

Evento del 1° de mayo de 2018.



En esta tesitura, de la prueba presentada por la quejosa para acreditar el evento citado, no se advierten circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan constar la existencia del evento de mérito, ya que de la misma sólo se puede apreciar la imagen del sujeto obligado y su logo, con la leyenda “Ruelas por Villa Corona; #yosoyindependiente”, por lo que sólo se advierte que se trata de propaganda publicada en el perfil de Facebook, sin que la misma te invite a participar en la consecución de un evento.

Evento del 6 de mayo de 2018.



Por cuanto hace al evento citado; de la prueba técnica aportada en el escrito de queja, se advierte que se trata de una fotografía compartida a través del perfil de Facebook del otrora candidato, sin que éste realice alguna manifestación o invitación respecto de algún acto de campaña, aunado a lo anterior la quejosa no aporta mayores elementos ni circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan a esta autoridad determinar la realización de un evento de campaña, así mismo, tampoco es posible determinar si la fecha de publicación corresponde con la fecha de la realización del supuesto evento denunciado, aunado a lo anterior, es menester de esta autoridad hacer constar que la referida publicación no cumple con las circunstancias de modo, tiempo y lugar.

Evento del 30 de mayo de 2018



De la prueba técnica aportada en el escrito de queja, con la que se pretende acreditar la realización de un evento fechado el día citado, en esta se observa un grupo de personas con vestimenta de mezclilla, playera blanca con el logo del otrora candidato, gorras blancas, las cuales se encuentran sosteniendo estandartes alusivos al logotipo del entonces candidato¹¹, sin embargo, esta autoridad electoral determina que dicha prueba, no cumple con las circunstancias de modo, tiempo y lugar, adicionalmente, cabe mencionar que esta fotografía fue publicada a través del perfil de Facebook del sujeto incoado el día 29 de mayo de 2018.

Evento del 1° de julio de 2018

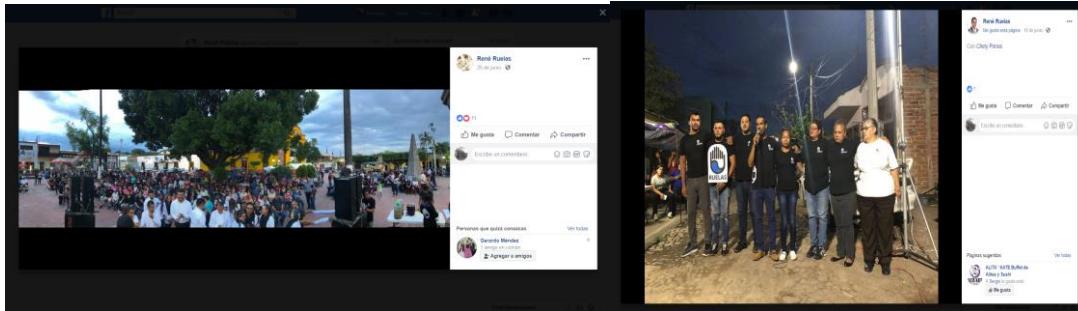
Mediante el escrito de queja, se aportó la prueba técnica, consistente en una fotografía, con la que se pretende acreditar el evento de mérito, sin embargo, de esta no se advierten elementos ni circunstancias de tiempo modo y lugar que permitan a esta autoridad determinar donde y cuando se llevó a cabo el supuesto evento denunciado, así mismos es viable señalar que del análisis a la fotografía presentada como elemento probatorio se observa playeras, gorras y estandartes con propaganda alusiva al candidato incoado, misma que como ya se refirió en párrafos que anteceden fueron reportados en el informe de campaña

Lámparas, sillas, refrigerios y vehículos

Ahora bien, por lo que respecta a los gastos por concepto de lámparas, sillas, refrigerios y vehículos los cuales a dicho del quejoso no fueron reportados a través del Sistema de Fiscalización (SIF), la denunciante aporta únicamente como elementos probatorios fotografías de las cuales no es posible advertir la existencia de tales conceptos, así mismo, tampoco aporta mayores elementos que generen a esta autoridad convicción alguna de que los mismos hayan representado un beneficio al candidato incoado, a continuación se detalla cada concepto.

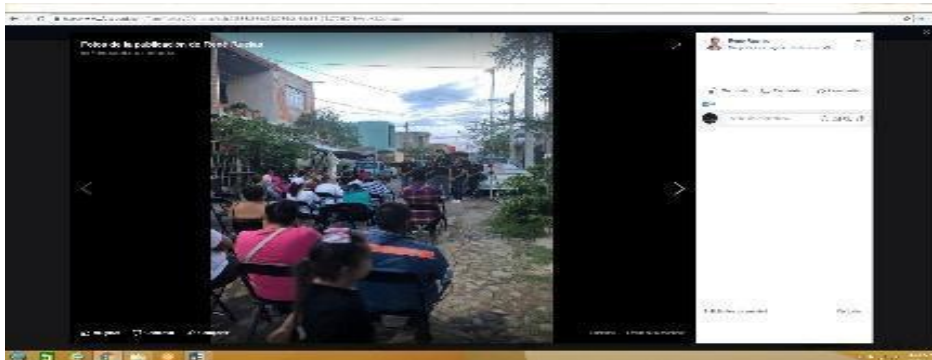
¹¹ Estos conceptos ya fueron estudiados en párrafos anterior, derivado de ese estudio se determinó que los mismos si fueron reportados en el informe de campaña correspondiente.

Lámparas



En cuanto al gasto citado previamente, la quejosa pretende acreditar mediante las pruebas técnica adjuntas, la utilización de lámparas, sin embargo, de la primera fotografía se aprecia una cumulo de personas concentradas en una plaza y al fondo se observa que la iluminación corresponde al alumbrado público de la referida plaza. Ahora bien, por cuanto hace a la segunda fotografía, en este se aprecia al candidato incoado acompañado de siete personas en posición lateral a un costado de una estructura metálica, mientras que a sus espaldas se observa iluminación, que al igual que la primera fotografía corresponde al alumbrado público. En consecuencia, dichas pruebas no pueden ser consideradas como una erogación.

Sillas



Por otro lado, con respecto al gasto por concepto de sillas que a decir de la quejosa fueron utilizadas, de las fotografías con las cuales la quejosa pretende sustentar la erogación por dicho concepto, no se advierte que se trate de un evento del otrora candidato, en el cual se requiriera la asistencia de personas; asimismo, de las imágenes se puede observar a diversas personas sentadas en sillas, sin que estén se encuentren rotuladas con el nombre del sujeto obligado o bien con su logo.

Refrigerios y vehículos

Ahora bien, de los hechos denunciados en el escrito de queja, mediante el cual se denuncian gastos por concepto de refrigerios y vehículos, esta autoridad advierte que las pruebas técnicas aportadas, ninguna se vincula a los referidos gastos, por lo que esta autoridad se encuentra limitada para fiscalizar los mismos.

En virtud de lo anterior, del simple contenido de la prueba técnica, no se advierten elementos que actualicen conductas que vulneren disposiciones en materia de fiscalización; aunado a ello, es oportuno señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha señalado que las fotografías (imágenes) como medio de prueba son susceptibles de ser manipuladas, por lo que resulta un medio probatorio limitado.

En primer término, esta autoridad no es omisa en señalar que las pruebas con las que sustenta su escrito de queja el hoy quejoso consisten en pruebas técnicas, lo anterior resulta fundamental para determinar el alcance que pueden tener las pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso para acreditar y probar la pretensión formulada. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la Jurisprudencia 4/2014 de rubro **“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN”**, emitida por dicho tribunal electoral, señala que es posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen.

Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los criterios sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación toda vez que, el quejoso parte de una premisa errónea al establecer que **“... la prueba técnica identifica a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.”**

En este sentido, en razón de su naturaleza, por sí mismas las pruebas técnicas no acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma.

A mayor abundamiento, las imágenes referidas no arrojan indicio alguno que permita considerar una línea de investigación para determinar si existió un beneficio a la campaña del C. Luis René Ruelas Ortega, otrora candidato a Presidente Municipal de Villa Corona, Jalisco, por los conceptos denunciados en el escrito de queja.

Por las razones expuestas en párrafos anteriores y en virtud de los cuadros insertos a la presente Resolución, al haberse observado que los conceptos de gastos consistentes en: **lonas, logos, banderas, estandartes, camisas, playeras, gorras, combustible, pinta bardas, micrófono y sonido**, materia de denuncia de la queja respectiva, fueron registrados a través del Sistema Integral de Fiscalización (SIF), por lo que esta autoridad determina que, a pesar de la imperfección de las pruebas técnicas ofrecidas por el denunciante, y de acuerdo al principio de exhaustividad, esta autoridad fiscalizadora se allegó de mayores elementos que generaron la convicción de la existencia de dichas operaciones así como el registro de éstas en los referidos sistemas.

Visto lo anterior, esta autoridad cuenta con elementos de certeza suficientes para acreditar que el sujeto denunciado reportó ante la autoridad electoral, en el marco de la revisión de los informes de campaña correspondiente, los gastos denunciados.

En razón de los argumentos expuestos, este Consejo General determina que no existen elementos que lleven a concluir que el C. Luis René Ruelas Ortega, otrora candidato a Presidente Municipal de Villa Corona, Jalisco, haya transgredido lo preceptuado en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, motivo por el cual esta autoridad considera debe declararse **infundado** el presente procedimiento administrativo de queja, en virtud de que los argumentos del quejoso son parciales y con aportación de documentales subjetivas y nulo valor probatorio pleno.

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara **infundado** el procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra el **C. Luis René Ruelas Ortega, otrora candidato a Presidente Municipal de Villa Corona, Jalisco**, en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Jalisco, en los términos del **Considerando 2, Apartado B** de la presente Resolución.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes.

TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

CUARTO. Infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalajara, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente SG-RAP-257/2018, remitiéndole para ello las constancias atinentes.

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo._____

Pasamos al Proyecto de Acuerdo identificado con el número de apartado 9.36._____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín._____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:

Muchas gracias, Consejero Presidente._____

En este caso no estamos ante un criterio diferenciado, aquí sí es un caso muy particular, no recuerdo que hayamos tenido un caso similar a éste y creo que valdría la pena pensar el cómo se está acatando, me parece que hay un error en cómo estamos acatando._____

Estamos ante que el Tribunal Electoral revoca una sanción que se impone a un Candidato de Coalición, la Coalición Partido Acción Nacional-Partido de la Revolución Democrática, quien impugna en la Resolución es el Partido Acción Nacional, por lo que la sanción que se le impone a la Coalición tiene un efecto en el Partido Acción Nacional y en el Partido de la Revolución Democrática como integrantes de la Coalición, en este caso el Tribunal Electoral nos ordena modificar y se va a reducir la sanción, sin embargo, lo que estamos haciendo es reduciendo la sanción únicamente por lo que hace al Partido Acción Nacional pero no por lo que hace al Partido de la Revolución Democrática cuando lo que nos revocó el Tribunal Electoral es la conclusión que fue de la Coalición, al ser una conclusión de la Coalición tiene efectos tanto en el Partido Acción Nacional como en el Partido de la Revolución Democrática, me parece que no hay congruencia que la Coalición se le imponga una sanción a uno de sus integrantes y otra sanción a otro de sus integrantes._____

Si bien, expresamente estoy de acuerdo en que el Tribunal Electoral no nos ordene modificar la conclusión por lo que hace al Partido Acción Nacional y al Partido de la

Revolución Democrática, lo que sí nos ordena el Tribunal Electoral es el que se revise la sanción recaída a la conclusión sancionatoria tal, pero es una sanción que, si bien nos dice que es correspondiente al Partido Acción Nacional, es una sanción de la Coalición, no sólo es una sanción del Partido Acción Nacional._____

Entonces, si esto lo aprobamos en estos términos lo que estaríamos haciendo es sancionando a un integrante de la Coalición por una conducta y a otro integrante de la Coalición con otra conducta, precisamente, porque uno impugnó y el otro no impugnó, es una sin razón lo que se está haciendo. Entiendo por qué la Unidad lo hizo de esta forma._____

En términos textuales lo que el Tribunal Electoral ordenó es que fuera en relación con el Partido Acción Nacional, sin embargo, el origen es una conclusión que tiene que ver con la Coalición._____

Al ser una conclusión de la Coalición, no puede haber un trato diferenciado entre los 2 integrantes de la Coalición y una conducta diferenciada respecto de la infracción de los 2 integrantes de la Coalición._____

Si bien como este caso no hemos tenido otros, sí hemos tomado decisiones de ampliar los efectos, por ejemplo, cuando se modifica una conclusión en términos del prorrateo, del prorrateo que impacta a los distintos candidatos involucrados con independencia de que no todos hayan impugnado la Resolución, porque si el gasto a prorratear son 10 pesos o son 100 pesos, tiene un impacto distinto en el prorrateo, por lo que aunque no nos haya ordenado el Tribunal Electoral, impactarlo completamente, lo hemos hecho en otros casos._____

Me parece que este caso es un claro ejemplo de una ocasión en la que, si la sanción fue a la Coalición y ésta se desagrega en 2 partidos políticos, la misma sanción tiene que, la suma de los 2 partidos políticos debería de dar la suma de la sanción y con lo

que estamos haciendo habría una incongruencia entre la suma de la sanción y la suma de la substanciación a cada uno de los partidos políticos integrantes de la Coalición._____
Por lo que me parece que, se tendría que ajustar para efectos de no solo el Partido Acción Nacional sino también el Partido de la Revolución Democrática como integrante de la Coalición._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín._____

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, tómenos la votación, por favor._

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 9.36._____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son ustedes tan amables._____

8 votos._____

¿En contra?_____

2 votos._____

Aprobado por 8 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles; no estando presente durante la votación la Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas), Consejero Presidente._____

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG1298/2018) Ptos. 9.36_____

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA QUINTA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL ELECTORAL CON SEDE EN TOLUCA, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE ST-RAP-59/2018

A N T E C E D E N T E S

I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. El seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado y la Resolución, identificados con los números **INE/CG1114/2018** e **INE/CG1115/2018**, que presentó la Comisión de Fiscalización del propio Instituto, sobre la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamiento, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima.

II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el catorce de agosto de dos mil dieciocho, el Partido Acción Nacional, presentó recurso de apelación para controvertir la parte conducente de la Resolución identificada con el número **INE/CG1115/2018**. Dicho recurso fue radicado en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Quinta Circunscripción Electoral Plurinominal con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México¹, en el expediente identificado con la clave alfanumérica **ST-RAP-59/2018**.

III. Sentencia Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Toluca resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el siete de septiembre de dos mil dieciocho, determinando en el Punto Resolutivo **PRIMERO**, lo que a continuación se transcribe:

¹ En adelante, Sala Regional Toluca

*“**ÚNICO.** Se **modifica** la resolución INE/CG1115/2018, aprobada el seis de agosto de dos mil dieciocho por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, **únicamente por cuanto hace a la sanción recaída a la conclusión sancionatoria 3 C55 P3, correspondiente al Partido Acción Nacional**, para que dicha autoridad emita una nueva, en los términos precisados en el Considerando Cuarto de la presente Resolución.”*

IV. Toda vez que en la ejecutoria se ordenó a este Consejo General emitir una nueva resolución en la que se sancione al Partido Acción Nacional por la omisión de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real; con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables, en consecuencia la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de mérito.

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44, numeral 1, incisos j); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos.

2. Que el siete de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Regional Toluca resolvió revocar parcialmente la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificada con la clave **INE/CG1115/2018**, en lo que fue materia de impugnación (conclusión **3_C55_P3**), respecto del Partido Acción Nacional en el estado de Colima, por lo que se procede a modificar la Resolución de mérito, observando a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria.

3. Que, en la sección relativa al estudio de fondo, dentro del Considerando CUARTO, el órgano jurisdiccional señaló que:

“(…)

CUARTO. Estudio de fondo: Registro de operaciones en tiempo real. La parte recurrente se agravia de la sanción que le fue impuesta por la responsable, consistente en la reducción del veinticinco por ciento de la ministración mensual de financiamiento ordinario hasta alcanzar la cantidad de \$2'834,958.30 (dos millones ochocientos treinta y cuatro novecientos cincuenta y ocho pesos 30/100 **M.N.**), con base en la conclusión 3 C55 P3, relativa a que éste dejó de realizar el registro contable de cincuenta y cinco operaciones en tiempo real, puesto que excedió los tres días posteriores a la realización de las operaciones de referencia, por un importe de \$2'951,915.56 (dos millones novecientos cincuenta y un mil novecientos quince pesos 56/100 **M.N.**).

Esencialmente, el recurrente argumenta que la determinación de la autoridad responsable es incorrecta, puesto que no dejó de presentar la documentación soporte de los gastos, así como de reportarlos en el SIF, por lo que atendió, en todo momento, a lo dispuesto en el artículo 79, párrafo 1, inciso b), fracción 1, de la Ley General de Partidos Políticos, así como el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización aplicable. La parte apelante menciona que, en tal sentido, incurrió en un registro extemporáneo, pero no en una omisión de registro, lo que, en su concepto, torna desproporcional la sanción que le fue impuesta.

El agravio es **fundado**.

En la consideración 34.3, apartado c), de la resolución impugnada, relativa a las irregularidades encontradas en relación con los informes de campaña de los institutos políticos que integraron la coalición "Por Colima al frente", esto es, de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, la autoridad responsable precisó que la conclusión derivada del Dictamen respectivo, identificada con la clave 3 C55 P3, correspondía a la comisión de una irregularidad de carácter sustancial o de fondo, por parte del sujeto obligado (coalición "Por Colima al frente"), consistente en la omisión de realizar el registro contable de cincuenta y cinco operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores a la realización de dichas operaciones, por un importe de \$2'951,915.56 (dos millones novecientos cincuenta y un mil novecientos quince pesos 56/100 **M.N.**).

No obstante, al individualizar la sanción correspondiente, la autoridad responsable calificó la falta como la omisión de reportar sus egresos por diversos conceptos, esto es, consideró que el sujeto obligado dejó de reportar gastos de campaña, con lo que, en su concepto, éste incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, párrafo 1, inciso b), fracción 1, de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, en los cuales se dispone lo siguiente:

(...)

La autoridad responsable argumentó que el sujeto obligado no presentó la documentación soporte de los gastos de campaña, entre otras, en relación con la irregularidad observada a la que corresponde la conclusión de referencia, por tanto, consideró que la infracción vulneró, sustancialmente, los principios de transparencia y de certeza en el origen de los recursos, puesto que, en su concepto, ello equivale a la no rendición de cuentas.

En tal sentido, la autoridad responsable consideró que resultaba aplicable lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, respecto a la determinación del valor de los gastos no reportados por el sujeto obligado, entre otras, por cuanto hace a las irregularidades correspondientes a la conclusión 3 C55 P3.

En ese tenor, la autoridad responsable precisó que la falta cometida ocasionó un resultado material y lesivo a los principios mencionados, lo que le permitía agravar el reproche al sujeto obligado.

Consecuentemente, al momento de imponer la sanción, por cuanto hace a la conclusión de mérito, la autoridad responsable calificó la falta como grave ordinaria, insistió en que se trataba en la omisión de reportar gastos de campaña, y eligió la reducción de la ministración mensual del financiamiento público ordinario permanente como la sanción idónea para cumplir con la función preventiva general y disuasoria que se busca con su imposición, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción 111, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Finalmente, la autoridad responsable determinó que la sanción a imponer sería de índole económica, equivalente al cien por ciento del monto involucrado, esto es, a la cantidad de \$2'951,915.56 (dos millones novecientos cincuenta y un mil novecientos quince pesos 56/100 M.N.), de la cual, el noventa y ocho por ciento le fue impuesto, individualmente, a la parte actora del presente recurso (Partido Acción Nacional) como sanción, mediante la reducción del veinticinco por ciento de sus ministraciones mensuales hasta alcanzar la cantidad de \$2'834,958.30 (dos millones ochocientos treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho pesos 30/100 M.N.).

Lo anterior, como lo sostiene la parte actora, evidencia que la sanción que le fue impuesta por la autoridad responsable resulta desproporcionada e incongruente, en atención a que la irregularidad encontrada consistió en el registro extemporáneo de los gastos en el sistema integral de fiscalización, esto es, con posterioridad a los tres días que se disponen en el artículo 38, párrafo

1, del Reglamento de Fiscalización, lo cual, si bien constituye una falta de índole sustantiva, como lo establece el párrafo 5 del numeral en cita, no equivale a la omisión de reportar los gastos de campaña de que se trate, como, incorrectamente, lo razonó la responsable.

Esto es así, puesto que de la documentación soporte remitida por la propia autoridad responsable, relativa a las cincuenta y cinco operaciones (conclusión 3 C55 P3) que la parte actora registró contablemente de manera extemporánea, se advierten las respectivas referencias contables, la descripción de las pólizas, los montos, la fecha de las operaciones, de su registro en el sistema, así como los días de retraso, como se muestra enseguida:

(...)

Contrariamente a lo resuelto por la autoridad responsable, la parte actora sí presentó la documentación soporte de los gastos de campaña de referencia, por lo que fue contrario a Derecho que resultase sancionado por una falta que no cometió, es decir, lo correcto individualizara por el a los que registro es que la sanción respectiva se contable extemporáneo de los egresos corresponden las operaciones en mención (artículos 60, párrafo 2, de la Ley General de Partidos Políticos, así como 17, 35, párrafo 1 , y 38 del Reglamento de Fiscalización), y no por la omisión de reportar sus gastos o de contable correspondiente fracción 1, de la Ley General no haber aportado la documentación [artículos 79, párrafo 1, inciso b), de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización].

En tal sentido, se alude a lo resuelto en los expedientes SUP-RAP-395/2016, SUP-RAP-453/2017, SUP-RAP-55/2018 y SUP-RAP-56/2018, en los que la Sala Superior de este Tribunal, respectivamente, consideró que:

- Lo dispuesto en los artículos 17 y 38 del Reglamento de Fiscalización, resulta constitucional pues **permite la fiscalización por parte de la autoridad responsable, en forma expedita y oportuna**, durante la campaña electoral, inclusive, en forma previa a la conclusión de los procesos electorales, lo que permite la calificación de los comicios con base en planteamientos de afectación a su equidad, concretamente, el rebase del tope de los gastos de campaña en el porcentaje y condiciones previstas en el artículo 41, párrafo segundo, Base VI, párrafo tercero, inciso a), de la Constitución federal (SUP-RAP-395/2016);*
- La obligación de los sujetos obligados de reportar las operaciones en tiempo real obedece al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los*

*recursos se lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los recursos, sí es casi inmediato, por lo que la omisión del registro de operaciones en tiempo real (tres días posteriores a su realización), **retrasa (no impide) la adecuada verificación que compete a la autoridad fiscalizadora electoral** (SUP-RAP-453/2017) y*

- *Para resolver los planteamientos concretos (SUP-55/2018 y SUP-RAP-56/2018), en cada caso, la infracción consistente en los gastos no reportados por el sujeto obligado no es igual a aquella que deriva de las erogaciones informadas de manera extemporánea.*

*Por tanto, al haber resultado fundado el agravio formulado por el partido recurrente, en contra de la conclusión sancionatoria identificada como **3 C55 P3**, lo procedente es modificar la resolución impugnada, **únicamente, por cuanto hace a la sanción recaída a dicha conclusión**, para que **la autoridad responsable, dentro de un plazo de siete días naturales**, contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución, **emita una nueva determinación en la que imponga la sanción correspondiente.***

Quedan subsistentes e intocadas, por cuanto hace al objeto del presente fallo, las conclusiones y, en su caso, sus respectivas sanciones, contenidas en la resolución controvertida, que no fueron materia de impugnación. (...)”

4. Que de la lectura del ST-RAP-59/2018, se desprende que la Sala Regional Toluca determinó revocar la Resolución INE/CG1115/2018, únicamente por cuanto hace a la sanción recaída a la conclusión sancionatoria 3_C55_P3, correspondiente al Partido Acción Nacional, para que este Consejo General emitiera una nueva resolución en la que se sancione al partido recurrente por la omisión de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real.

5. Para dar cumplimiento a la determinación de la Sala Regional Toluca en el ST-RAP-59/2018, esta autoridad electoral procedió a acatar en los términos ordenados en la referida sentencia, de acuerdo a lo siguiente:

Sentencia	Efectos	Acatamiento
Revoca la resolución INE/CG1115/2018 emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.	Respecto a la conclusión 3_C55_P3, se revoca la resolución impugnada para que la autoridad emitiera una nueva en la que se sancione al Partido Acción Nacional por la omisión de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real.	<p>En cumplimiento a la resolución recaída dentro del recurso de apelación ST-RAP-59/2018, dentro del considerando 34.3 se realizan las siguientes modificaciones:</p> <p>- Respecto del inciso c), por lo que toca al Partido Acción Nacional, se deja sin efectos el análisis y sanción relativos a la conclusión 3_C55_P3, por lo que dicho inciso pasa de 22 (veintidós) faltas a 21 (veintiún) faltas.</p> <p>- Respecto del inciso d), se adiciona la conclusión 3_C55_P3, por lo que se desarrolla el análisis de la conducta infractora y su consecuente sanción. El inciso d) pasa de 6 a 7 faltas de fondo.</p> <p>-Se modifica el resolutivo Tercero de la resolución INE/CG1115/2018 con el fin de estar acorde con los puntos anteriores.</p>

6. En tanto la Sala Regional Toluca determinó revocar la Resolución impugnada INE/CG1115/2018, en lo particular la conclusión 3_C55_P3 para que esta autoridad emitiera una nueva resolución en la que se sancione al Partido Acción Nacional por la omisión de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real.

Es pertinente señalar que si bien la conclusión que se analiza corresponde al considerando 34.3, en el cual se estudian las faltas de la Coalición por Colima al Frente, integrada por los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, lo cierto es que en su recurso de apelación, el Partido Acción Nacional no se presentó como integrante de la citada coalición, ni impugno en representación de esta. Asimismo, de la lectura del resolutivo único de la resolución ST-RAP-59/2018, se desprende que el órgano jurisdiccional solo revoca la resolución y ordena la emisión de una nueva respecto del Partido Acción Nacional. Así, solo se procede a modificar la resolución INE/CG1115/2018, considerandos c) y d), conclusión 3_C55_P3, así como el Resolutivo Tercero por lo toca al partido recurrente.

Dicho lo anterior, se procede a acatar la resolución de mérito en los siguientes términos

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE CAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE DIPUTADO LOCAL Y AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, EN EL ESTADO DE COLIMA (PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES)

(...)

C O N S I D E R A N D O

(...)

En acatamiento al ST-RAP-59/2018 se realizan las siguientes modificaciones respecto a la conclusión 3_C55_P3, atendiendo a los términos precisados en el Considerando Cuarto de la resolución que se acata, únicamente por lo que respecta al Partido Acción Nacional:

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del Informe de la precampaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado son las siguientes:

a) (...)

b) (...)

c) 21 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3_C2_P2, 3_C3_P2, 3_C4_P2, 3_C9_P2, 3_C10_P2, 3_C11_P2, 3_C12_P2, 3_C13_P2, 3_C26_P3,

3_C27_P3, 3_C28_P3, 3_C29_P3, 3_C41_P3, 3_C42_P3, 3_C43_P3, 3_C44_P3, 3_C45_P3, 3_C50_P3, 3_C51_P3, 3_C52_P3 y 3_C54_P3.

d) 7 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3_C5_P2, 3_C14_P2, 3_C15_P2, 3_C17_P2, 3_C31_P3, 3_C47_P3 y 3_C55_P3.

(...)

A continuación, se desarrollan los apartados en comento:

(...)

c) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras de los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización: Conclusiones: 3_C2_P2, 3_C3_P2, 3_C4_P2, 3_C9_P2, 3_C10_P2, 3_C11_P2, 3_C12_P2, 3_C13_P2, 3_C26_P3, 3_C27_P3, 3_C28_P3, 3_C29_P3, 3_C41_P3, 3_C42_P3, 3_C43_P3, 3_C44_P3, 3_C45_P3, 3_C50_P3, 3_C51_P3, 3_C52_P3, 3_C54_P3 y 3_C55_P3 (esta conclusión se deja sin efectos en términos del ST-RAP-59/2018 por lo que toca al Partido Acción Nacional).

Visto lo anterior, a continuación, se presentan las conclusiones finales sancionatorias determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado.

No.	Conclusión	Monto involucrado
3_C2_P2	<i>El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por diversos conceptos de artistas, equipo de sonido, vinilonas, alimentos, sillas, tablonas, inflables, brincolines, entre otros, por un monto de \$108,540.77</i> <i>Asimismo, el costo determinado se acumulará al tope de gastos para el periodo de campaña.</i>	\$108,540.77
3_C3_P2	<i>El sujeto obligado omitió reportar gastos realizados por concepto de rotulación de vehículo y bardas, por \$22,480.80.</i> <i>Asimismo, el costo determinado se acumulará al tope de gastos para el periodo de campaña.</i>	\$22,480.80

No.	Conclusión	Monto involucrado
3_C4_P2	<p><i>El sujeto obligado omitió reportar gastos realizados por diversos hallazgos del monitoreo de internet por un monto de \$18,126.16</i></p> <p><i>Asimismo, el costo determinado se acumulará al tope de gastos para el periodo de campaña</i></p>	\$18,126.16
3_C9_P2	<p><i>El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de propaganda contratada en los diversos eventos, por un monto de \$39,473.49.</i></p> <p><i>Asimismo, el costo determinado se acumulará al tope de gastos para el periodo de campaña.</i></p>	\$39,473.49
3_C10_P2	<p><i>El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de escritorios, computadoras, bocinas, sillas y mesas, por un monto de \$1,403.60</i></p> <p><i>Asimismo, el costo determinado se acumulará al tope de gastos para el periodo de campaña.</i></p>	\$1,403.60
3_C11_P2	<p><i>El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de propaganda en la vía pública por un monto de \$33,582.32</i></p> <p><i>Asimismo, el costo determinado se acumulará al tope de gastos para el periodo de campaña.</i></p>	\$33,582.32
3_C12_P2	<p><i>El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos por inserciones en revistas por un monto de \$13,920.00</i></p> <p><i>Asimismo, el costo determinado se acumulará al tope de gastos para el periodo de campaña.</i></p>	\$13,920.00
3_C13_P2	<p><i>El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de video y perifoneo, por un monto de \$18,280.01</i></p> <p><i>Asimismo, el costo determinado se acumulará al tope de gastos para el periodo de campaña.</i></p>	\$18,280.01
3_C26_P3	<i>El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por propaganda en la vía pública por \$17,086.94.</i>	\$17,086.94
3_C27_P3	<i>El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por propaganda exhibida en páginas de internet por concepto de videos por \$20,880.00.</i>	\$20,880.00

No.	Conclusión	Monto involucrado
3_C28_P3	<i>El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los gastos por concepto de una mampara por \$2,192.40.</i>	\$2,192.40
3_C29_P3	<i>El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los gastos generados por el inmueble de casa de campaña, por \$78,324.44</i>	\$78,324.44
3_C41_P3	<i>El sujeto obligado omitió reportar los gastos por concepto de espectaculares, bardas y carteleras, por un monto de \$80,763.16.</i>	\$80,763.16
3_C42_P3	<i>El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por inserciones en medios impresos por un monto de \$6,960.00.</i>	\$6,960.00
3_C43_P3	<i>El sujeto obligado omitió, omitió reportar los gastos detectados por el monitoreo en internet por un monto de \$44,080.00.</i>	\$44,080.00
3_C44_P3	<i>El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de perifoneo, alimentos y sillas, por un monto de \$15,836.41.</i>	\$15,836.41
3_C45_P3	<i>El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos identificados en las casas de campaña, por concepto de calendarios, calcomanías, computadora, impresora, banderas, equipo de sonido, mesas, planta de luz, ventiladores y escritorios por \$27,643.01.</i>	\$27,643.01
3_C50_P3	<i>El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de propaganda en la vía pública por un monto de \$16,994.00</i>	\$16,994.00
3_C51_P3	<i>El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos por concepto de equipo de sonido, templete, luces y estructura metálica y sillas, por un monto de \$16,147.20.</i>	\$16,147.20
3_C52_P3	<i>El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos por concepto de enfriador de agua, mesas, sillas, escritorio e impresora por un monto de \$17,946.52.</i>	\$17,946.52
3_C54_P3	<i>El sujeto obligado omitió reportar la totalidad de las remuneraciones otorgadas a los Representantes Generales y de Casilla por un importe de \$797,700.00</i>	\$797,700.00
3_C55_P3	Se deja sin efectos en términos del ST-RAP-59/2018 por lo que toca al Partido Acción Nacional	

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende

del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de mérito, se hicieron del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar las observaciones realizadas.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los candidatos involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña materia de estudio, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6 del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de sus candidatos las observaciones que se detallan en el oficio referido en el análisis de la conclusión. Esto, a efecto que los candidatos presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido político, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de las conductas materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral

-registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS”, capítulo III “*DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS*” de la legislación en comento, con relación al Libro Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes siguientes:

- 1) Informes del gasto ordinario:
 - a) Informes trimestrales.
 - b) Informe anual.
 - c) Informes mensuales.
- 2) Informes de Proceso Electoral:
 - a) Informes de precampaña.
 - b) Informes de obtención de apoyo ciudadano.
 - c) Informes de campaña.
- 3) Informes presupuestales:
 - a) Programa Anual de Trabajo.
 - b) Informe de Avance Físico-Financiero.
 - c) Informe de Situación Presupuestal.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior.”*

De lo anterior se desprende, que, no obstante que el sujeto obligado haya incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.

Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para

desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen

la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación²:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de

² Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del partido no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante las conductas observadas, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de las conductas infractoras de mérito, al partido político pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las que es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado las diversas conductas que violentan los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra los mismos bienes jurídicos tutelados; por cuestión de método, para facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten.

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

a) Valor protegido o trascendencia de la norma.

- b)** La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto.
- c)** La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.
- d)** Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
- e)** La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
- f)** Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.
- g)** Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
- h)** La capacidad económica del sujeto infractor.

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

En relación con las irregularidades identificadas en las **conclusiones 3_C2_P2, 3_C3_P2, 3_C4_P2, 3_C9_P2, 3_C10_P2, 3_C11_P2, 3_C12_P2, 3_C13_P2, 3_C26_P3, 3_C27_P3, 3_C28_P3, 3_C29_P3, 3_C41_P3, 3_C42_P3, 3_C43_P3, 3_C44_P3, 3_C45_P3, 3_C50_P3, 3_C51_P3, 3_C52_P3, 3_C54_P3 y 3_C55_P3** (*esta conclusión se deja sin efectos en términos del ST-RAP-59/2018 por lo que toca*

al Partido Acción Nacional) del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar sus egresos por diversos conceptos, realizados durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima.

En el caso a estudio, las faltas corresponden a una omisión del sujeto obligado consistente en omitir reportar gastos realizados, durante la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la entidad referida, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.³

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que ampara los gastos realizados, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refieren las irregularidades observadas:

3_C2_P2. El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por diversos conceptos de artistas, equipo de sonido, vinilonas, alimentos, sillas, tablonas, inflables, brincolines, entre otros, por un monto de \$108,540.77

Asimismo, el costo determinado se acumulará al tope de gastos para el periodo de campaña.

3_C3_P2. El sujeto obligado omitió reportar gastos realizados por concepto de rotulación de vehículo y bardas, por \$22,480.80.

Asimismo, el costo determinado se acumulará al tope de gastos para el periodo de campaña.

3_C4_P2. El sujeto obligado omitió reportar gastos realizados por diversos hallazgos del monitoreo de internet por un monto de \$18,126.16

Asimismo, el costo determinado se acumulará al tope de gastos para el periodo de campaña

³ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

<p><i>3_C9_P2. El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de propaganda contratada en los diversos eventos, por un monto de \$39,473.49.</i></p> <p><i>Asimismo, el costo determinado se acumulará al tope de gastos para el periodo de campaña.</i></p>
<p><i>3_C10_P2. El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de escritorios, computadoras, bocinas, sillas y mesas, por un monto de \$1,403.60</i></p> <p><i>Asimismo, el costo determinado se acumulará al tope de gastos para el periodo de campaña.</i></p>
<p><i>3_C11_P2. El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de propaganda en la vía pública por un monto de \$33,582.32</i></p> <p><i>Asimismo, el costo determinado se acumulará al tope de gastos para el periodo de campaña.</i></p>
<p><i>3_C12_P2. El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos por inserciones en revistas por un monto de \$13,920.00</i></p> <p><i>Asimismo, el costo determinado se acumulará al tope de gastos para el periodo de campaña.</i></p>
<p><i>3_C13_P2. El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de video y perifoneo, por un monto de \$18,280.01</i></p> <p><i>Asimismo, el costo determinado se acumulará al tope de gastos para el periodo de campaña.</i></p>
<p><i>3_C26_P3. El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por propaganda en la vía pública por \$17, 086.94.</i></p>
<p><i>3_C27_P3. El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por propaganda exhibida en páginas de internet por concepto de videos por \$20,880.00.</i></p>
<p><i>3_C28_P3. El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los gastos por concepto de una mampara por \$2,192.40.</i></p>
<p><i>3_C29_P3. El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los gastos generados por el inmueble de casa de campaña, por \$78,324.44</i></p>
<p><i>3_C41_P3. El sujeto obligado omitió reportar los gastos por concepto de espectaculares, bardas y carteleras, por un monto de \$80,763.16.</i></p>
<p><i>3_C42_P3. El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por inserciones en medios impresos por un monto de \$6,960.00.</i></p>
<p><i>3_C43_P3. El sujeto obligado omitió, omitió reportar los gastos detectados por el monitoreo en internet por un monto de \$44,080.00.</i></p>

<i>3_C44_P3. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de perifoneo, alimentos y sillas, por un monto de \$15,836.41.</i>
<i>3_C45_P3. El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos identificados en las casas de campaña, por concepto de calendarios, calcomanías, computadora, impresora, banderas, equipo de sonido, mesas, planta de luz, ventiladores y escritorios por \$27,643.01.</i>
<i>3_C50_P3. El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de propaganda en la vía pública por un monto de \$16,994.00</i>
<i>3_C51_P3. El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos por concepto de equipo de sonido, templete, luces y estructura metálica y sillas, por un monto de \$16,147.20.</i>
<i>3_C52_P3. El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos por concepto de enfriador de agua, mesas, sillas, escritorio e impresora por un monto de \$17,946.52.</i>
<i>3_C54_P3. El sujeto obligado omitió reportar la totalidad de las remuneraciones otorgadas a los Representantes Generales y de Casilla por un importe de \$797,700.00</i>
<i>3_C55_P3. Esta conclusión se deja sin efectos en términos del ST-RAP-59/2018 por lo que toca al Partido Acción Nacional</i>

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el resultado de la comisión de las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

Previo al análisis de la norma transgredida es relevante señalar que los monitoreos de medios constituyen un mecanismo previsto en los Reglamentos aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que le permiten a la autoridad fiscalizadora verificar la veracidad de la información proporcionada por los partidos políticos y coaliciones en sus informes; ya que se trata de un conjunto de actividades diseñadas para medir, analizar y procesar en forma continua, la información emitida por medios de comunicación electrónicos, impresos o alternos, respecto de un tema,

lugar y tiempo determinados, con el registro y representación objetiva de los promocionales, anuncios, programas, entre otros, objeto del monitoreo; según señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-43/2006.

De igual manera, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en el SUP-RAP-86/2007 ha definido al monitoreo en materia de fiscalización como “como una herramienta idónea para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y fiscalización de las actividades de los partidos políticos, encomendadas a las autoridades electorales, ya que a través de éstos se tiende a garantizar la equidad en la difusión de los actos proselitistas de los partidos políticos; medir los gastos de inversión en medios de comunicación de dichas entidades de interés público y apoyar la fiscalización de los institutos políticos para prevenir que se rebasen los topes de campaña, entre otros aspectos”.

Bajo esta línea, surgió el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos como un instrumento de medición que permite a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, a través de las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales, recabar información y documentación soporte sobre inserciones en prensa y anuncios espectaculares colocados en la vía pública con la finalidad de cotejarlo con lo reportado por los partidos políticos y coaliciones en sus Informes de Campaña, con el fin de verificar que todos los gastos realizados hayan sido debidamente registrados en su contabilidad y reportados en los Informes correspondientes.

Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar la realización de monitoreos, se encuentra regulada en el artículo 318 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra señala:

“Artículo 318.

Monitoreo en diarios, revistas y otros medios impresos

- 1. La Comisión, a través de la Unidad Técnica, realizará las gestiones necesarias para llevar a cabo monitoreo en diarios, revistas y otros medios impresos tendentes a obtener el voto o promover a los precandidatos, candidatos y candidatos independientes a cargo de elección popular.*
- 2. Los resultados obtenidos en el monitoreo serán conciliados con lo reportado por los partidos, coaliciones y candidatos y aspirantes en los informes de ingresos y gastos aplicados a las precampañas y campañas.*

3. *La Comisión a propuesta de la Unidad Técnica, establecerá la metodología para el monitoreo en diarios, revistas y otros medios impresos que promuevan a precandidatos y candidatos de los partidos políticos y coaliciones, así como de los candidatos independientes durante los Procesos Electorales.*
4. *El monitoreo consistirá en reunir, clasificar y revisar la propaganda que se publique en medios impresos locales y de circulación nacional tendentes a obtener o promover a precandidatos o candidatos y candidatos independientes o bien promocionar genéricamente a un partido político y/o coalición durante el Proceso Electoral.*
5. *El costo de la propaganda de medios impresos no reportados por los partidos políticos; coaliciones, candidatos y aspirantes, se determinará conforme a lo establecido en el Artículo 27 del presente Reglamento.*
6. *El monto de la propaganda no reportada o conciliada por los partidos políticos y aspirantes se acumulará a los gastos de precampaña de la elección de que se trate.*
7. *El monto de la propaganda no reportada o no reconocida por los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, durante los procesos electorales se acumulará a los gastos de campaña de la elección de que se trate y de ser el caso, se prorrateará en los términos que establece el Reglamento.*
8. *El periodo de monitoreo de medios impresos para precampaña dará inicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226 de la Ley de Instituciones, y para campaña local, deberá ser determinado conforme a los acuerdos que para tal efecto apruebe el Consejo General.*
9. *El periodo de monitoreo de medios impresos para campaña dará inicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley de Instituciones.*
10. *La Comisión podrá solicitar el apoyo de la Coordinación Nacional de Comunicación Social (CNCS) y de la estructura desconcentrada del Instituto con el objeto de hacerse llegar de elementos de prueba suficientes a través del monitoreo de la publicidad en diarios, revistas y otros medios impresos durante las precampañas y campañas.*
11. *La Unidad Técnica realizará conciliaciones semanales de las muestras o testigos incorporadas en el sistema en línea de contabilidad, contra lo detectado en el monitoreo y pondrá a disposición del partido, coalición o candidato independiente los resultados.”*

Como puede apreciarse, el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos contribuye a la construcción de condiciones de credibilidad y confianza, al incorporar medidas novedosas para fiscalizar eficientemente el manejo administrativo y financiero de las campañas políticas; ya que permite a la Unidad de Fiscalización cruzar la información a través de la detección de anuncios espectaculares colocados en la vía pública y de la búsqueda de información en medios impresos de circulación nacional y local, respecto de toda aquella publicidad

y propaganda para cotejarlos con lo reportado por los partidos y coaliciones bajo este rubro; por lo que se configura como un mecanismo que permite cumplir cabalmente con el procedimiento de auditoría y verificar la aplicación de recursos para detectar oportunamente una posible omisión de gastos.

Ahora bien, dada la naturaleza y finalidad de los monitoreos, es inconcuso que este sistema constituye una herramienta indispensable para verificar el cumplimiento de las normas en materia de financiamiento, lo cual pone en evidencia que se trata de instrumentos fiables y dotados de valor probatorio para determinar las posibles infracciones cometidas a la normatividad electoral, por ser esa precisamente la función para la cual fueron diseñados en la legislación.

En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. De esta forma, si bien el la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su artículo 462, numeral 2 que sólo las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, mientras que las pruebas técnicas harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente; la Sala Superior ha señalado que cuando se trata de imágenes, es casi imposible hacerlas constar en un documento, pues para describirlas de manera exacta es necesario utilizar una gran cantidad palabras, lo cual haría casi imposible el intento de consignar en un documento el resultado de un monitoreo que comprenda varios elementos registrados.

Por tanto, en casos como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga costar los resultados en medios electrónicos para considerarlos como pruebas con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos realizados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Entenderlo de distinta manera, se traduciría en una actividad inocua, en tanto que los monitoreos carecerían de razón; según se enfatiza en el SUP-RAP 133/2012 en donde se asigna pleno valor probatorio a los Monitoreos realizados por el Instituto Federal Electoral en ejercicio de sus atribuciones.

Es preciso mencionar que la *ratio essendis* de este criterio se encuentra recogido en la Jurisprudencia 24/2010, aprobada por la Sala Superior en la sesión pública celebrada el cuatro de agosto de dos mil diez; misma que señala que:

“...los testigos de grabación, producidos por el Instituto Federal Electoral, constituyen pruebas técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno, porque son obtenidos por el propio Instituto, al realizar el monitoreo, para verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión de promocionales en radio y televisión.”

Por lo anterior, se colige que los resultados del monitoreo que dieron origen a la presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública en ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no obra en la revisión de los informes de campaña prueba alguna en contrario que sirva para desvirtuar los resultados del monitoreo, como podría ser otro documento elaborado por la propia autoridad, cuyo contenido diverja del informe, según se establece en el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-117/2010.

Previo a la trascendencia de la norma transgredida, es relevante señalar que las visitas de verificación constituyen un mecanismo previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el Reglamento de Fiscalización, que le permite a la autoridad fiscalizadora verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad vigente respecto a la veracidad de lo reportado en los Informes de los Ingresos y Gastos que realicen los partidos políticos en el periodo de campaña; pues se trata de una herramienta diseñada para contrastar y corroborar la información recabada por el personal designado por la Unidad de Fiscalización, para la realización de las verificaciones, con lo reportado por los institutos políticos.

De igual manera, las visitas de verificación son una actividad eficaz de la autoridad fiscalizadora para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y vigilancia respecto de los informes de Campaña que presenten los institutos políticos, a efecto de cotejar que todos los gastos realizados hayan sido debidamente registrados en su contabilidad y reportados en los Informes correspondientes, garantizando así la certeza y transparencia en el origen de los recursos.

Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar las visitas de verificación, se encuentra regulada en los artículos 297 y 298 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra señalan:

“Artículo 297.

Objetivo de las visitas

1. La Comisión podrá ordenar visitas de verificación con el fin de corroborar el cumplimiento de las obligaciones y la veracidad de los informes anual, de precampaña y campaña presentados por los partidos políticos, aspirantes y candidatos.

Artículo 298.

Concepto

1. La visita de verificación es la diligencia de carácter administrativo que ordena la Comisión, tiene por objeto corroborar el cumplimiento de las obligaciones y la veracidad de los informes presentados por los partidos políticos, aspirantes y candidatos independientes.”

Como se advierte de la lectura al precepto transcrito, las visitas de verificación permiten a la Unidad de Fiscalización dar cumplimiento a la función encomendada como órgano encargado del control y vigilancia de las finanzas de los partidos políticos y coaliciones. Permite tener mayor certeza respecto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de financiamiento y gasto. Dicha facultad admite allegarse de información que pueda ser cotejada con la reportada por los partidos y coaliciones, contando así con un parámetro que pueda ser contrastado y genere una verificación integral y eficaz.

En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel.

Por tanto, en el caso como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga constar en actas de verificación los resultados de las visitas para considerarlos como pruebas con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos realizados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, por lo que entenderlo de distinta manera se traduciría en una actividad inocua perdiendo la razón de ser de dichos instrumentos.

Aunado a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de la Comisión de Fiscalización CF/004/2016, por el que se emiten, entre otros, los Lineamientos para realizar las visitas de verificación, durante las precampañas y campañas del Proceso Electoral 2015-2016, en el artículo 8, fracción IV, inciso a), mismo que para mayor referencia se transcribe a continuación:

“a) La visita de verificación podrá ampliarse a otro domicilio en el que se conozca que se realizan actividades relacionadas con el sujeto verificado o donde exista material de propaganda electoral alusiva a la obtención del apoyo ciudadano o precampaña, así como con el candidato y candidatos independientes, siempre que durante el desarrollo de la visita de verificación se desprendan elementos objetivos, veraces y fidedignos, que hagan presumible la existencia de documentación o propaganda electoral en un domicilio diverso al señalado en la orden primigenia.”

Por lo anterior, se colige que los resultados de las visitas de verificación que dieron origen a la presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública en ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no obra en la revisión de los informes de campaña prueba alguna en contrario que sirva para desvirtuar los resultados de las actas de verificación, como podría ser otro documento elaborado por la propia autoridad, cuyo contenido diverja del informe presentado.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse diversas faltas sustanciales consistentes en no reportar los gastos realizados durante el periodo de campaña, mismo que carecen de objeto partidista, se vulneran sustancialmente los principios de transparencia y de certeza en el origen de los recursos.

Así las cosas, las faltas sustanciales que traen consigo la no rendición de cuentas, impiden garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito violó los valores sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que, en el campo de la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino

que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia electoral.

Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.

Ahora bien el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente⁴:

- a)** Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio.
- b)** Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
- c)** Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
- d)** Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación y sus componentes deberán ser comparables.
- e)** Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios,

⁴ Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016

esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y comparable.

Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, valorará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.

Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.

En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación comprobatoria.

El sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos⁵ y 127 del Reglamento de Fiscalización⁶, mismos que a la letra señalan:

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

⁵ Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes: b) Informes de Campaña: Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; (...)

⁶ “Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las hipótesis normativas prevista en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de

la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos mediante la verificación oportuna, al contar con la documentación soporte de las cuentas por pagar con saldos a la conclusión de la campaña.

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al sujeto obligado se traducen en **faltas** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que las infracciones deben calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **considerando 21** de la resolución INE/CG1115/2018, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

Conclusión 3-C2-P2

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$108,540.77 (ciento ocho mil, quinientos cuarenta pesos 77/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en

el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁷

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de **\$108,540.77 (ciento ocho mil quinientos cuarenta pesos 77/100 M.N.)**.

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Acción Nacional** en lo individual lo correspondiente al 98% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$106,369.95 (ciento seis mil trescientos sesenta y nueve pesos 95/100 M.N.) 93/100 M.N.)**.

Asimismo, al **Partido de la Revolución Democrática** en lo individual lo correspondiente al 2% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la

⁷ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$2,170.81 (dos mil ciento setenta 81/00 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Conclusión 3-C4-P2

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$18,126.16 (dieciocho mil ciento veintiséis pesos 16/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁸

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de **\$18,126.16 (dieciocho mil ciento veintiséis pesos 16/100 M.N.).**

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Acción Nacional** en lo individual lo correspondiente al 98% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$17,763.63 (diecisiete mil setecientos sesenta y tres pesos 63/100 M.N.).**

⁸ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Asimismo, al **Partido de la Revolución Democrática** en lo individual lo correspondiente al 2% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$362.52 (trescientos sesenta y dos pesos 52/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Conclusión 3 C9 P2

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.

- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$39,473.49 (treinta y nueve mil cuatrocientos setenta y tres pesos 49/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁹

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de **\$39,473.49 (treinta y nueve mil cuatrocientos setenta y tres pesos 49/100 M.N.)**.

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Acción Nacional** en lo individual lo correspondiente al 98% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en reducción del 25%

⁹ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

(veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$38,684.02 (treinta y ocho mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 02/100 M.N.)**.

Asimismo, al **Partido de la Revolución Democrática** en lo individual lo correspondiente al 2% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$789.46 (setecientos ochenta y nueve pesos 46/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Conclusión 3 C10 P2

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad

el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima.

- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$1,403.60 (mil cuatrocientos tres 60/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹⁰

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de **\$1,403.60 (mil cuatrocientos tres 60/100 M.N.)**.

¹⁰ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Acción Nacional** en lo individual lo correspondiente al 98% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$1,375.52 (Mil trescientos setenta y cinco pesos 52/100 M.N.)**¹¹

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Conclusión 3 C11 P2

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad

¹¹ Por lo que respecta al Partido de la Revolución Democrática, toda vez que la sanción a imponerse es menor a una UMA, la misma se deja sin efectos

el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima.

- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$33,582.32 (treinta y tres mil quinientos ochenta y dos 32/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹²

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de **\$33,582.32 (treinta y tres mil quinientos ochenta y dos 32/100 M.N.)**.

¹² Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Acción Nacional** en lo individual lo correspondiente al 98_% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$32,910.67 (treinta y dos novecientos diez pesos 67/100 M.N.)**.

Asimismo, al **Partido de la Revolución Democrática** en lo individual lo correspondiente al 2% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$671.64 (seiscientos setenta y un pesos 64/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Conclusión 3 C12 P2

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.

- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$13,920.00 (trece mil novecientos veinte pesos 00/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹³

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

¹³ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de **\$13,920.00 (trece mil novecientos veinte pesos 00/100 M.N.)**.

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Acción Nacional** en lo individual lo correspondiente al 98% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$13,641.60 (trece mil seiscientos cuarenta y un pesos 60/100 M.N.)**.

Asimismo, al **Partido de la Revolución Democrática** en lo individual lo correspondiente al 2% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$278.40 (doscientos setenta y ocho pesos 40/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Conclusión 3 C13 P2

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.

- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$18,280.01 (dieciocho mil doscientos ochenta pesos 01/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹⁴

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a

¹⁴ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 100% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de **\$18,280.01 (dieciocho mil doscientos ochenta pesos 01/100 M.N.)**.

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Acción Nacional** en lo individual lo correspondiente al 98% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$17,914.40 (diecisiete mil novecientos catorce pesos 40/100 M.N.)**.

Asimismo, al **Partido de la Revolución Democrática** en lo individual lo correspondiente al 2% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$365.60 (trescientos sesenta y cinco pesos 60/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Conclusión 3_C26_P2

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.

- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$17,086.94 (diecisiete mil ochenta y seis pesos 94/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹⁵

¹⁵ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de **\$17,086.94 (diecisiete mil ochenta y seis pesos 94/100 M.N.)**.

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Acción Nacional** en lo individual lo correspondiente al 98% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$16,745.20 (dieciséis mil setecientos cuarenta y cinco pesos 20/100 M.N.)**.

Asimismo, al **Partido de la Revolución Democrática** en lo individual lo correspondiente al 2% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$341.73 (trescientos cuarenta y un pesos 73/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Conclusión 3 C27 P2

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$20,880.00 (veinte mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹⁶

¹⁶ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de **\$20,880.00 (veinte mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.)**.

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Acción Nacional** en lo individual lo correspondiente al 98% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$20,462.40 (veinte mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 40/100 M.N.)**.

Asimismo, al **Partido de la Revolución Democrática** en lo individual lo correspondiente al 2% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$417.60 (cuatrocientos diecisiete pesos 60/100 M.N.)**.

materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Conclusión 3 C28 P2

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$2,192.40 (dos mil ciento noventa y dos pesos 40/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los

elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹⁷

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 100% (ciento por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de **\$2,192.40 (dos mil ciento noventa y dos pesos 40/100 M.N.)**.

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Acción Nacional** en lo individual lo correspondiente al 98% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$2,148.55 (dos mil ciento cuarenta y ocho pesos 55/100 M.N.)**.¹⁸

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de

¹⁷ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

¹⁸ Respecto a la sanción a imponerse al Partido de la Revolución Democrática, toda vez que la misma es menos a una UMA, esta queda sin efectos.

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Conclusión 3 C29 P2

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$78,324.44 (setenta y ocho mil trescientos veinticuatro pesos 44/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en

el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹⁹

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de **\$78,324.44 (setenta y ocho mil trescientos veinticuatro pesos 44/100 M.N.)**.

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Acción Nacional** en lo individual lo correspondiente al 98% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$76,757.95 (setenta y seis mil setecientos cincuenta y siete pesos 95/100 M.N.)**.

Asimismo, al **Partido de la Revolución Democrática** en lo individual lo correspondiente al 2% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la

¹⁹ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$1,566.48 (mil quinientos sesenta y seis pesos 48/100 M.N.)**

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Conclusión 3 C41 P2

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$80,763.16 (ochenta mil setecientos sesenta y tres pesos 16/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.²⁰

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de **\$80,763.16 (ochenta mil setecientos sesenta y tres pesos 16/100 M.N.).**

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Acción Nacional** en lo individual lo correspondiente al 98% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$79,147.89 (setenta y nueve mil ciento cuarenta y siete pesos 89/100 M.N.).**

²⁰ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Asimismo, al **Partido de la Revolución Democrática** en lo individual lo correspondiente al 2% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$1,615.26 (Mil seiscientos quince pesos 26/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Conclusión 3 C42 P2

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.

- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$6,960.00 (seis mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.²¹

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de **\$6,960.00 (seis mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.)**.

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Acción Nacional** en lo individual lo correspondiente al 98% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en reducción del 25% (veinticinco por

²¹ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$6,820.00 (seis mil ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.)**

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido de la Revolución Democrática** en lo individual lo correspondiente al 2% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$139.20 (ciento treinta y nueve pesos 20/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Conclusión 3 C43 P2

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad

el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima.

- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$44,080.00 (cuarenta y cuatro mil ochenta pesos 00/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.²²

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de **\$44,080.00 (cuarenta y cuatro mil ochenta pesos 00/100 M.N.)**.

²² Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Acción Nacional** en lo individual lo correspondiente al 98% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$43,198.40 (cuarenta y tres mil ciento noventa y ocho pesos 40/100 M.N.)**.

Asimismo, al **Partido de la Revolución Democrática** en lo individual lo correspondiente al 2% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$881.60 (ochocientos ochenta y un pesos 60/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Conclusión 3 C44 P2

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.

- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$15,836.41 (quince mil ochocientos treinta y seis pesos 41/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.²³

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

²³ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de **\$15,836.41 (quince mil ochocientos treinta y seis pesos 41/100 M.N.)**.

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Acción Nacional** en lo individual lo correspondiente al 98% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$15,519.68 (quince mil quinientos diecinueve pesos 68/100 M.N.)**.

Asimismo, al **Partido de la Revolución Democrática** en lo individual lo correspondiente al 2% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$316.72 (trescientos dieciséis pesos 72/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Conclusión 3 C45 P2

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.

- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$27,643.01 (veintisiete mil seiscientos cuarenta y tres pesos 01/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.²⁴

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a

²⁴ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de **\$27,643.01 (veintisiete mil seiscientos cuarenta y tres pesos 01/100 M.N.)**.

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Acción Nacional** en lo individual lo correspondiente al 98% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$27,090.14 (veintisiete mil noventa pesos 14/100 M.N.)**.

Asimismo, al **Partido de la Revolución Democrática** en lo individual lo correspondiente al 2% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$552.86 (quinientos cincuenta y dos pesos 86/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Conclusión 3 C50 P2

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.

- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$16,994.00 (dieciséis mil novecientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.²⁵

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III

²⁵ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de **\$16,994.00 (dieciséis mil novecientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.).**

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Acción Nacional** en lo individual lo correspondiente al 98% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$16,654.12 (dieciséis mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 12/100 M.N.).**

Asimismo, al **Partido de la Revolución Democrática** en lo individual lo correspondiente al 2% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$339.88 (trescientos treinta y nueve pesos 88/100 M.N.).**

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Conclusión 3 C51 P2

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por

la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.

- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$16,147.20 (dieciséis mil ciento cuarenta y siete pesos 20/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.²⁶

²⁶ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de **\$16,147.20 (dieciséis mil ciento cuarenta y siete pesos 20/100 M.N.)**.

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Acción Nacional** en lo individual lo correspondiente al 98% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$16,146.22 (dieciséis mil ciento cuarenta y seis pesos 22/100 M.N.)**.

Asimismo, al **Partido de la Revolución Democrática** en lo individual lo correspondiente al 2% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$322.94 (trescientos veintidós pesos 94/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Conclusión 3 C52 P2

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$17,946.52 (diecisiete mil novecientos cuarenta y seis pesos 52/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en

el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.²⁷

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de **\$17,946.52 (diecisiete mil novecientos cuarenta y seis pesos 52/100 M.N.)**.

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Acción Nacional** en lo individual lo correspondiente al 98% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$17,587.58 (diecisiete mil quinientos ochenta y siete pesos 58/100 M.N.)**

Asimismo, al **Partido de la Revolución Democrática** en lo individual lo correspondiente al 2% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la

²⁷ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$358.93 (trescientos cincuenta y ocho pesos 93/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Conclusión 3 C54 P2

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$797,700.00 (setecientos noventa y siete mil setecientos pesos 00/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.²⁸

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de **\$797,700.00 (setecientos noventa y siete mil setecientos pesos 00/100 M.N.)**.

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Acción Nacional** en lo individual lo correspondiente al 98% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$781,746.00 (setecientos ochenta y un mil setecientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.)**.

²⁸ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Asimismo, al **Partido de la Revolución Democrática** en lo individual lo correspondiente al 2% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$15,940.00 (quince mil novecientos cuarenta pesos 20/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Conclusión 3 C55 P2

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Colima.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.

- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$2,951,915.56 (dos millones cincuenta y un mil novecientos quince pesos 56/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.²⁹

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de **\$2,951,915.56 (dos millones cincuenta y un mil novecientos quince pesos 56/100 M.N.).**

En cumplimiento a lo ordenado en el ST-RAP-59/2018, se deja sin efectos la sanción impuesta en este apartado, únicamente al Partido Acción Nacional.

²⁹ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Asimismo, al **Partido de la Revolución Democrática** en lo individual lo correspondiente al 2% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$59,038.3112 (cincuenta y nueve mil treinta y ocho pesos 31/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

d) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias infractoras del artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

No.	Conclusión	Monto involucrado
3_C5_P2	<i>El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 55 de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$702,190.90</i>	\$702,190.90
3_C14_P2	<i>El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 31 de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$901,940.25.</i>	\$901,940.25.
3_C15_P2	<i>El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 5 de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$322,868.38</i>	\$322,868.38
3_C17_P2	<i>El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 8 de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$2, 252,268.02</i>	\$2, 252,268.02

No.	Conclusión	Monto involucrado
3_C31_P3	<i>El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 65 de sus operaciones en tiempo real, durante el segundo periodo excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$1,088,630.01</i>	\$1,088,630.01
3_C47_P3	<i>El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 40 de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$866,532.11</i>	\$866,532.11
3_C55_P3	<i>El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 55 operaciones en tiempo real, excediendo los 3 días posteriores en que se realizó la operación, en el periodo normal tercero, por un importe de \$2, 951,915.56. (En cumplimiento a lo ordenado en el ST-RAP-59/2018, se sanciona únicamente al Partido Acción Nacional por la omisión de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real)</i>	\$2,951,915.56

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en la observación de mérito, misma que se hizo del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente de dicha notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como la documentación que subsanara la irregularidad detectada; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar la observación realizada.

Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los candidatos involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña materia de estudio en la entidad correspondiente, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6, del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de sus candidatos las observaciones que se detallan en el oficio referido en el análisis de las conclusiones. Esto, a efecto que los candidatos

presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido político, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia y que los candidatos contaran con la oportunidad de preparar una adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de las conductas materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes siguientes:

- 1) Informes del gasto ordinario:

- a) Informes trimestrales.
- b) Informe anual.
- c) Informes mensuales.
- 2) Informes de Proceso Electoral:
 - a) Informes de precampaña.
 - b) Informes de obtención de apoyo ciudadano.
 - c) Informes de campaña.**
- 3) Informes presupuestales:
 - a) Programa Anual de Trabajo.
 - b) Informe de Avance Físico-Financiero.
 - c) Informe de Situación Presupuestal.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario solidarios del cumplimiento de los informes gastos que se refieren en el inciso anterior, y”*.

De lo anterior se desprende que no obstante que el sujeto obligado haya omitido realizar registros contables en tiempo real, no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda interna.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello,

consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de las conductas materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea el partido político y/o el candidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan³⁰.

En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

³⁰ Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización, establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efecto de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación³¹:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de

³¹ Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a las conductas sujetas a análisis, las respuestas del sujeto obligado no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendientes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante las conductas observadas, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de las conductas infractoras de mérito al partido político pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que violentan el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra el mismo bien jurídico tutelado; por cuestión de método y para facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a)** Tipo de infracción (acción u omisión)
- b)** Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c)** Comisión intencional o culposa de la falta.
- d)** La trascendencia de las normas transgredidas.
- e)** Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f)** La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g)** La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando VEINTIUNO de la resolución INE/CG1115/2018.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.

Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones 3_C5_P2, 3_C14_P2, 3_C15_P2, 3_C17_P2, 3_C31_P3, 3_C47_P3 y **3_C55_P3** (***En cumplimiento a lo ordenado en el ST-RAP-59/2018, se sanciona únicamente al Partido Acción Nacional por la omisión de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real***) del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Colima.

En el caso a estudio, las faltas corresponden a diversas **omisiones** consistentes en incumplir con su obligación de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.³²

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Coima, por lo que vulneró lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

³² Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

<i>El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 55 de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$702,190.90</i>
<i>El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 31 de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$901,940.25.</i>
<i>El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 5 de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$322,868.38</i>
<i>El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 8 de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$2, 252,268.02</i>
<i>El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 65 de sus operaciones en tiempo real, durante el segundo periodo excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$1,088,630.01</i>
<i>El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 40 de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$866,532.11</i>
<i>El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 55 operaciones en tiempo real, excediendo los 3 días posteriores en que se realizó la operación, en el periodo normal tercero, por un importe de \$2, 951,915.56. (En cumplimiento a lo ordenado en el ST-RAP-59/2018, se sanciona únicamente al Partido Acción Nacional por la omisión de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real)</i>

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Colima, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el

resultado de la comisión de las faltas referidas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de violación alguna del citado ente político, para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse faltas sustanciales por omitir realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad y la certeza en la rendición de cuentas.

Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito traen consigo la no rendición de cuentas, impiden garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En las conclusiones que se analizan, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización³³.

Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir realizar el registro de operaciones contables en tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad fiscalizadora electoral.

³³ "Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente reglamento (...) 5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto."

La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la norma, lo cual vulneraría el Estado de Derecho.

De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización.

Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un sujeto obligado no registre a tiempo los movimientos de los recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebató a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que fiscaliza.

Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y,

en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que correspondan.

Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como una falta sustantiva, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea.

En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y paradigmas del sistema previsto en la legislación.

Así las cosas, ha quedado acreditado que al realizar registros contables en forma extemporánea, es decir, al omitir realizar los registros contables en tiempo real, el sujeto obligado vulnera la hipótesis normativa prevista en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta señalada, es la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, a través del registro en tiempo real realizado por el sujeto obligado en el manejo de sus recursos.

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al sujeto obligado se traducen en **diversas faltas** de resultado que ocasionan un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que las infracciones en cuestión generan una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los sujetos obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en una misma conducta y por tanto, en una misma falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado de legalidad certeza en la rendición de cuentas.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de las conductas a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que las infracciones deben calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando VEINTIUNO de la resolución INE/CG1115/2018, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

Conclusión 3 C5 P2

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el

sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus operaciones en tiempo real, durante el periodo que se fiscaliza.

- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en omitir realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Colima, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$702,190.90 (setecientos dos mil ciento noventa pesos 90/100 M.N.)**.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.³⁴

³⁴ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracciones I y II del ordenamiento en cita, no son aptas para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor, una amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente (ahora Unidades de Medida y Actualización), serían poco idóneas para disuadir las conductas infractoras como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al ente político es de índole económica equivalente al 5% (cinco por ciento) sobre el monto total de las operaciones registradas fuera de tiempo real, que en la especie asciende a un total de \$35,109.54 (treinta y cinco mil ciento nueve pesos 54/100 M.N.).

Por tanto, atendiendo el porcentaje de aportación a la Coalición Por Colima al Frente de cada uno de los partidos,^[4] este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al Partido **Acción Nacional** en lo individual, lo correspondiente al 98% del monto total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$34,407.34** (treinta y cuatro mil cuatrocientos siete pesos 34/100 M.N.).

Asimismo, al Partido **de la Revolución Democrática** en lo individual, lo correspondiente al 2% del monto total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$702.19** (setecientos dos pesos 19/100 M.N.).

^[4] De acuerdo a lo establecido al artículo 340 del Reglamento de Fiscalización, el cual señala: "Individualización para el caso de coaliciones 1. Si se trata de infracciones cometidas por dos o más partidos que integran o integraron una coalición, deberán ser sancionados de manera individual atendiendo el principio de proporcionalidad, el grado de responsabilidad de cada uno de dichos entes políticos y sus respectivas circunstancias y condiciones. Al efecto, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos en términos del convenio de coalición".

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Conclusión 3 C14 P2

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus operaciones en tiempo real, durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en omitir realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Colima, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$901,940.25 (novecientos un mil novecientos cuarenta pesos 25/100 M.N.)**.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.³⁵

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracciones I y II del ordenamiento en cita, no son aptas para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor, una amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente (ahora Unidades de Medida y Actualización), serían poco idóneas para disuadir las conductas infractoras como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al ente político es de índole económica equivalente al 5% (cinco por ciento) sobre el monto total de las operaciones registradas fuera de tiempo real, que en la especie asciende a un total de \$45,097.01 (cuarenta y cinco mil noventa y siete pesos 01/100 M.N.).

Por tanto, atendiendo el porcentaje de aportación a la Coalición Por Colima al Frente de cada uno de los partidos,^[4] este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al Partido **Acción Nacional** en lo individual, lo correspondiente al 98% del monto total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

³⁵ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

^[4] De acuerdo a lo establecido al artículo 340 del Reglamento de Fiscalización, el cual señala: "Individualización para el caso de coaliciones 1. Si se trata de infracciones cometidas por dos o más partidos que integran o integraron una coalición, deberán ser sancionados de manera individual atendiendo el principio de proporcionalidad, el grado de responsabilidad de cada uno de dichos entes políticos y sus respectivas circunstancias y condiciones. Al efecto, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos en términos del convenio de coalición".

consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$44,195.07** (cuarenta y cuatro mil ciento noventa y cinco pesos 07/100 M.N.).

Asimismo, al Partido **de la Revolución Democrática** en lo individual, lo correspondiente al 2% del monto total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$901.94 (novecientos un pesos 94/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Conclusión 3 C15 P2

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus operaciones en tiempo real, durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en omitir realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Colima, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.

- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$322,868.38 (trescientos veintidós mil ochocientos sesenta y ocho pesos 38/100 M.N.).**
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.³⁶

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracciones I y II del ordenamiento en cita, no son aptas para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor, una amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente (ahora Unidades de Medida y Actualización), serían poco idóneas para disuadir las conductas infractoras como la que en este caso nos ocupa para

³⁶ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al ente político es de índole económica equivalente al 5% (cinco por ciento) sobre el monto total de las operaciones registradas fuera de tiempo real, que en la especie asciende a un total de \$16,143.42 (dieciséis mil ciento cuarenta y tres pesos 42/100 M.N.).

Por tanto, atendiendo el porcentaje de aportación a la Coalición Por Colima al Frente de cada uno de los partidos,^[4] este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al Partido **Acción Nacional** en lo individual, lo correspondiente al 98% del monto total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$15,820.55** (quince mil ochocientos veinte pesos 55/100 M.N.).

Asimismo, al Partido **de la Revolución Democrática** en lo individual, lo correspondiente al 2% del monto total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$322.86** (trescientos veintidós pesos 86/100 M.N.).

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

^[4] De acuerdo a lo establecido al artículo 340 del Reglamento de Fiscalización, el cual señala: "Individualización para el caso de coaliciones 1. Si se trata de infracciones cometidas por dos o más partidos que integran o integraron una coalición, deberán ser sancionados de manera individual atendiendo el principio de proporcionalidad, el grado de responsabilidad de cada uno de dichos entes políticos y sus respectivas circunstancias y condiciones. Al efecto, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos en términos del convenio de coalición".

Conclusión 3 C17 P2

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus operaciones en tiempo real, durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en omitir realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Colima, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$2,252,268.02 (dos millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos sesenta y ocho pesos 02/100 M.N.)**.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los

elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.³⁷

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracciones I y II del ordenamiento en cita, no son aptas para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor, una amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente (ahora Unidades de Medida y Actualización), serían poco idóneas para disuadir las conductas infractoras como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al ente político es de índole económica equivalente al 5% (cinco por ciento) sobre el monto total de las operaciones registradas fuera de tiempo real, que en la especie asciende a un total de \$112,613.40 (ciento doce mil seiscientos trece pesos 40/100 M.N.).

Por tanto, atendiendo el porcentaje de aportación a la Coalición Por Colima al Frente de cada uno de los partidos,^[4] este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al Partido **Acción Nacional** en lo individual, lo correspondiente al 98% del monto total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

³⁷ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

^[4] De acuerdo a lo establecido al artículo 340 del Reglamento de Fiscalización, el cual señala: "Individualización para el caso de coaliciones 1. Si se trata de infracciones cometidas por dos o más partidos que integran o integraron una coalición, deberán ser sancionados de manera individual atendiendo el principio de proporcionalidad, el grado de responsabilidad de cada uno de dichos entes políticos y sus respectivas circunstancias y condiciones. Al efecto, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos en términos del convenio de coalición".

consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$110,361.13** (ciento diez mil trescientos sesenta y un pesos 13/100 M.N.).

Asimismo, al Partido **de la Revolución Democrática** en lo individual, lo correspondiente al 2% del monto total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$2,252.26 (dos mil doscientos cincuenta y dos pesos 26/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Conclusión 3 C31 P2

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus operaciones en tiempo real, durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en omitir realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018 en el

estado de Colima, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.

- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$1,008,630.01 (un millón ochenta y ocho mil seiscientos treinta pesos 01/100 M.N.).**
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.³⁸

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracciones I y II del ordenamiento en cita, no son aptas para satisfacer los propósitos

³⁸ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor, una amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente (ahora Unidades de Medida y Actualización), serían poco idóneas para disuadir las conductas infractoras como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al ente político es de índole económica equivalente al 5% (cinco por ciento) sobre el monto total de las operaciones registradas fuera de tiempo real, que en la especie asciende a un total de \$50,431.50 (cincuenta mil cuatrocientos treinta y un pesos 50/100 M.N.).

Por tanto, atendiendo el porcentaje de aportación a la Coalición Por Colima al Frente de cada uno de los partidos,^[4] este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al Partido **Acción Nacional** en lo individual, lo correspondiente al 98% del monto total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$49,422.87 (cuarenta y nueve mil cuatrocientos treinta y un pesos 50/100 M.N.)**.

Asimismo, al Partido **de la Revolución Democrática** en lo individual, lo correspondiente al 2% del monto total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$1,008.63 (mil ocho pesos 63/100 M.N.)**.

^[4] De acuerdo a lo establecido al artículo 340 del Reglamento de Fiscalización, el cual señala: "Individualización para el caso de coaliciones 1. Si se trata de infracciones cometidas por dos o más partidos que integran o integraron una coalición, deberán ser sancionados de manera individual atendiendo el principio de proporcionalidad, el grado de responsabilidad de cada uno de dichos entes políticos y sus respectivas circunstancias y condiciones. Al efecto, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos en términos del convenio de coalición".

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Conclusión 3 C47 P3

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus operaciones en tiempo real, durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en omitir realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Colima, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$866,532.11 (ochocientos sesenta y seis mil quinientos treinta y dos pesos 11/100 M.N.)**.

- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.³⁹

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracciones I y II del ordenamiento en cita, no son aptas para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor, una amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente (ahora Unidades de Medida y Actualización), serían poco idóneas para disuadir las conductas infractoras como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al ente político es de índole económica equivalente al 5% (cinco por ciento) sobre el monto total de las operaciones registradas fuera de tiempo real, que en la especie asciende a un total de \$43,326.61 (cuarenta y tres mil trescientos veintiséis pesos 61/100 M.N.).

Por tanto, atendiendo el porcentaje de aportación a la Coalición Por Colima al Frente de cada uno de los partidos,^[4] este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al Partido **Acción Nacional** en lo individual, lo correspondiente al 98%

³⁹ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

^[4] De acuerdo a lo establecido al artículo 340 del Reglamento de Fiscalización, el cual señala: "Individualización para el caso de coaliciones 1. Si se trata de infracciones cometidas por dos o más partidos que integran o integraron una coalición, deberán ser sancionados de manera individual atendiendo el principio de proporcionalidad, el grado de responsabilidad de cada uno de dichos entes políticos y sus respectivas circunstancias y condiciones. Al efecto, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos en términos del convenio de coalición".

del monto total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$42,460.07** (cuarenta y dos mil cuatrocientos sesenta 07/100 M.N.).

Asimismo, al Partido **de la Revolución Democrática** en lo individual, lo correspondiente al 2% del monto total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$866.53 (ochocientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Conclusión 3_C55_P3 *(En cumplimiento a lo ordenado en el ST-RAP-59/2018, se sanciona únicamente al Partido Acción Nacional por la omisión de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real)*

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus operaciones en tiempo real, durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en omitir realizar el registro contable de sus operaciones

en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Colima, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.

- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$2,951,915.56 (dos millones novecientos cincuenta y un mil novecientos quince pesos 56/100 M.N.).**
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁴⁰

⁴⁰ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracciones I y II del ordenamiento en cita, no son aptas para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor, una amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente (ahora Unidades de Medida y Actualización), serían poco idóneas para disuadir las conductas infractoras como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al ente político es de índole económica equivalente al 5% (cinco por ciento) sobre el monto total de las operaciones registradas fuera de tiempo real que asciende a la cantidad de \$2,951,915.56 (dos millones novecientos cincuenta y un mil novecientos quince pesos 56/100 M.N.), por lo que el monto de sanción es de **\$147,595.78 (ciento cuarenta y siete mil quinientos noventa y cinco pesos 78/100 M.N.)**.

Por tanto, atendiendo el porcentaje de aportación a la Coalición Por Colima al Frente de cada uno de los partidos,^[4] este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al Partido **Acción Nacional** en lo individual, lo correspondiente al 98% del monto total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$144,643.86 (ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y tres pesos 86/100 M.N.)**. *(En cumplimiento a lo ordenado en el ST-RAP-59/2018, se sanciona únicamente al Partido Acción Nacional por la omisión de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real)*

^[4] De acuerdo a lo establecido al artículo 340 del Reglamento de Fiscalización, el cual señala: "Individualización para el caso de coaliciones 1. Si se trata de infracciones cometidas por dos o más partidos que integran o integraron una coalición, deberán ser sancionados de manera individual atendiendo el principio de proporcionalidad, el grado de responsabilidad de cada uno de dichos entes políticos y sus respectivas circunstancias y condiciones. Al efecto, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos en términos del convenio de coalición".

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

7. Las sanciones impuestas al Partido Acción Nacional integrante de la coalición “Por Colima al Frente” impuesta en la resolución **INE/CG1115/2018**, particularmente por lo que toca a la conclusión 3-C55-P3 se vieron modificadas en virtud del presente acatamiento.

Sanciones en resolución INE/CG1115/2018	Modificación	Sanciones en Acatamiento a ST-RAP-59/2018
<p>TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 34.3 de la presente Resolución, se imponen a la Coalición Por Colima al Frente las sanciones siguientes:</p> <p>(...)</p> <p>c) 22 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones: 3_C2_P2, 3_C3_P2, 3_C4_P2, 3_C9_P2, 3_C10_P2, 3_C11_P2, 3_C12_P2, 3_C13_P2, 3_C26_P3, 3_C27_P3, 3_C28_P3, 3_C29_P3, 3_C41_P3, 3_C42_P3, 3_C43_P3, 3_C44_P3, 3_C45_P3, 3_C50_P3, 3_C51_P3, 3_C52_P3, 3_C54_P3 y 3_C55_P3.</p> <p>(...)</p> <p><u>Conclusión 3 C55 P2</u></p> <p>Al Partido Acción Nacional una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$2,834,958.30 (Dos millones ochocientos treinta y cuatro mil</p>	<p>Por lo que toca al Partido Acción Nacional en los términos ordenados en el ST-RAP-59/2018, se deja sin efectos la sanción impuesta en el resolutivo Tercero, inciso c) del Considerando 34.3, conclusión 3_C55_P3 que sancionaba al partido con una cantidad de \$2,834,958.30 (Dos millones ochocientos treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho pesos 30/100 M.N.). Así, en cumplimiento a la Resolución que se acata, por lo que toca al Partido Acción Nacional, se sanciona la conclusión 3_C55_P3 por la omisión de reportar operaciones en tiempo real, siendo el criterio de sanción del 5% (cinco por ciento) sobre el monto involucrado. En este sentido, se modifica el Resolutivo Tercero, inciso d) del Considerando 34.3, conclusión 3_C55_P3, sancionando únicamente al Partido Acción Nacional con una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$144,643.86 (ciento cuarenta y cuatro mil</p>	<p>TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 34.3 de la presente Resolución, se imponen a la Coalición Por Colima al Frente las sanciones siguientes:</p> <p>(...)</p> <p>c) 21 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones: 3_C2_P2, 3_C3_P2, 3_C4_P2, 3_C9_P2, 3_C10_P2, 3_C11_P2, 3_C12_P2, 3_C13_P2, 3_C26_P3, 3_C27_P3, 3_C28_P3, 3_C29_P3, 3_C41_P3, 3_C42_P3, 3_C43_P3, 3_C44_P3, 3_C45_P3, 3_C50_P3, 3_C51_P3, 3_C52_P3, 3_C54_P3 y 3_C55_P3 (esta conclusión se deja sin efectos en términos del ST-RAP-59/2018 por lo que toca al Partido Acción Nacional).</p> <p>(...)</p> <p><u>Conclusión 3 C55 P2</u></p> <p>En cumplimiento a lo ordenado en el ST-RAP-59/2018, se deja sin efectos la sanción impuesta en este apartado, únicamente al Partido Acción Nacional.</p>

Sanciones en resolución INE/CG1115/2018	Modificación	Sanciones en Acatamiento a ST-RAP-59/2018
<p>novecientos cincuenta y ocho pesos 30/100 M.N.)</p> <p>Al Partido de la Revolución Democrática una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$59,038.3112 (cincuenta y nueve mil treinta y ocho pesos 20/100 M.N.)</p> <p>d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión: 3_C5_P2, 3_C14_P2, 3_C15_P2, 3_C17_P2, 3_C31_P3, 3_C47_P3</p> <p>(...)</p>	<p>seiscientos cuarenta y tres pesos 86/100 M.N.)</p>	<p>Al Partido de la Revolución Democrática una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$59,038.3112 (cincuenta y nueve mil treinta y ocho pesos 31/100 M.N.)</p> <p>d) 7 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión: 3_C5_P2, 3_C14_P2, 3_C15_P2, 3_C17_P2, 3_C31_P3, 3_C47_P3 y 3_C55_P3 (En cumplimiento a lo ordenado en el ST-RAP-59/2018, se sanciona únicamente al Partido Acción Nacional por la omisión de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real)</p> <p>(...)</p> <p>Conclusión 3 C55 P2</p> <p>Al Partido Acción Nacional una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$144,643.86 (ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y tres pesos 86/100 M.N.) (En cumplimiento a lo ordenado en el ST-RAP-59/2018, se sanciona únicamente al Partido Acción Nacional por la omisión de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real)</p>

8. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en los considerandos **5, 6 y 7** del Acuerdo de mérito, se impone únicamente al Partido

Acción Nacional integrante de la **coalición Por Colima al Frente**, las sanciones consistentes en:

TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 34.3 de la presente Resolución, se imponen a la Coalición Por Colima al Frente las sanciones siguientes:

(...)

c) 21 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones: 3_C2_P2, 3_C3_P2, 3_C4_P2, 3_C9_P2, 3_C10_P2, 3_C11_P2, 3_C12_P2, 3_C13_P2, 3_C26_P3, 3_C27_P3, 3_C28_P3, 3_C29_P3, 3_C41_P3, 3_C42_P3, 3_C43_P3, 3_C44_P3, 3_C45_P3, 3_C50_P3, 3_C51_P3, 3_C52_P3, 3_C54_P3 y 3_C55_P3 **(esta conclusión se deja sin efectos en términos del ST-RAP-59/2018 por lo que toca al Partido Acción Nacional).**

(...)

Conclusión 3 C55 P2

En cumplimiento a lo ordenado en el ST-RAP-59/2018, se deja sin efectos la sanción impuesta en este apartado, únicamente al Partido Acción Nacional.

Al Partido de la Revolución Democrática una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$59,038.3112 (cincuenta y nueve mil treinta y ocho pesos 20/100 M.N.)

d) 7 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión: 3_C5_P2, 3_C14_P2, 3_C15_P2, 3_C17_P2, 3_C31_P3, 3_C47_P3 y 3_C55_P3 **(En cumplimiento a lo ordenado en el ST-RAP-59/2018, se sanciona únicamente al Partido Acción Nacional por la omisión de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real)**

(...)

Conclusión 3 C55 P2

Al Partido Acción Nacional una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$144,643.86 (ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y tres pesos 86/100 M.N.)** (En cumplimiento a lo ordenado en el **ST-RAP-59/2018**, se sanciona únicamente al Partido Acción Nacional por la omisión de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real).

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

A C U E R D A

PRIMERO. Se modifica la parte conducente de la Resolución **INE/CG1115/2018**, aprobada en sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, en los términos precisados en el Considerando **5 a 8** del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Quinta Circunscripción Electoral Plurinominal con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **ST-RAP-59/2018**, remitiéndole para ello las constancias atinentes.

TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales haga del conocimiento del Instituto Electoral del Estado de Colima el presente Acuerdo, a efecto de que se proceda al cobro de las sanciones impuestas, en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme, de conformidad con lo establecido en los considerandos seis y ocho del presente Acuerdo con relación al INE/CG1115/2018.

CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario del Consejo. _____

Le pido que Informe el contenido de los Acuerdos aprobados a la Sala Superior y a la Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que correspondan, ello para los efectos jurídicos conducentes. _____

Del mismo modo, le pido, Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente asunto del orden del día. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, es el relativo a los Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de diversos procedimientos oficiosos, de queja y administrativo sancionadores en materia de fiscalización instaurados en contra de Partidos Políticos Nacionales, mismo que se compone de 2 apartados. ____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Les consulto a ustedes si desean reservar para su discusión en lo particular algún apartado del presente punto del orden del día o abrir, en su caso, una ronda en lo general. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. _____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Para reservar el apartado 10.2, por favor. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:
¿Alguien desea reservar el apartado 10.1? _____

Al no ser reservado, Secretario del Consejo, tome la votación correspondiente al apartado 10.1. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:
Con gusto, Consejero Presidente. _____

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 10.1. _____

Quien está a favor, sírvanse a manifestarlo. _____

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación la Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas), Consejero Presidente. _____

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG1299/2018) Ptos. 10.1 _____

INE/CG1299/2018

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE P-UFRPP 56/13

Ciudad de México, 12 de septiembre de dos mil dieciocho.

VISTO para resolver el expediente número **P-UFRPP 56/13**, integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los Partidos Políticos Nacionales.

A N T E C E D E N T E S

I. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. En sesión extraordinaria celebrada el veintiséis de septiembre de dos mil trece, el Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral aprobó la Resolución **CG242/2013**, respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos Nacionales correspondientes al ejercicio dos mil doce, mediante la cual, entre otras cuestiones, se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del Partido Revolucionario Institucional, ello en atención a lo establecido en el Punto Resolutivo **DÉCIMO SEGUNDO**, Considerando **2.2**, inciso **j)**, conclusión **101**. A continuación, se transcribe la parte que interesa: (Fojas 1-13 del expediente)

“En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció en la conclusión 101 lo siguiente:

Circularizaciones a Proveedores y Prestadores de Servicios

Conclusión 101

“Derivado de las circularizaciones, se observaron saldos reportados por 10 proveedores con importes superiores a lo registrado contablemente por el partido por \$2,791,965.38.”

I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO.

Conclusión 101.

(...)

Derivado de la Revisión del Informe Anual 2012 y con el objeto de llevar a cabo la verificación de los comprobantes que soportaron los egresos reportados, se llevó a cabo la compulsa correspondiente con proveedores y prestadores de servicio; sin embargo, a la fecha de la elaboración del oficio UF-DA/7154/13, no habían dado respuesta los proveedores que fueron señalados en el Anexo 1 de los oficios UF-DA/6425/13 y UF-DA/7154/13.

En consecuencia y con la finalidad de verificar a cabalidad las operaciones realizadas por el partido, a los proveedores y prestadores de servicio referenciados en el Anexo 1 de los oficios UF-DA/6424/13 y UF-DA/7154/13, se le solicitó presentara lo siguiente:

- *Las aclaraciones que a su derecho convinieran.*

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 339 y 351 del Reglamento de Fiscalización.

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/6425/13, del 27 de junio de 2013, recibido por el partido en la misma fecha.

Al respecto, con escrito SFA/406/13, del 12 de julio de 2013, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

‘Respecto de la compulsa realizada con proveedores y prestadores de servicios se hace la aclaración que para poder dar respuesta a la presente observación, le solicitamos nos proporcione copia simple de los acuses de recibido de los oficios señalados en el Anexo 1 del oficio que se contesta, que fundamentan la misma. Lo anterior, con la finalidad de poder identificar a dichos proveedores y prestadores de servicios y contactar con ellos a fin de que hagan llegar su contestación a la autoridad electoral a la brevedad.’

Adicionalmente, en seguimiento a las solicitudes de información, que esta Unidad de Fiscalización realizó con los proveedores y prestadores de servicios, se determinó lo que se detalla a continuación:

(...)

Por lo que respecta a 30 oficios marcados con (B), en la columna REFERENCIA UF-DA/7154/13, del Anexo 1 del oficio UF-DA/7154/13, a la fecha de su elaboración, esta Unidad de Fiscalización recibió respuesta de los proveedores y prestadores de servicios, por lo tanto, de la verificación a la documentación proporcionada, se determinó que presenta diferencias contra los registros contables del partido, por tal motivo la observación no quedó subsanada.

En cuanto a 77 oficios marcados con (C), en la columna “REFERENCIA OFICIO UF-DA/7154/13, del Anexo 1 del oficio UF-DA/7154/13, a la fecha de su elaboración, esta Unidad de Fiscalización continuaba sin recibir respuesta de los proveedores y prestadores de servicios con los cuales el partido registró operaciones en el ejercicio 2012, por tal motivo, la observación no quedó subsanada.

En consecuencia y con la finalidad de verificar a cabalidad las operaciones realizadas por el partido, los proveedores y prestadores de servicio referenciados con (B) y (C) en el Anexo 1, del oficio UF-DA/7154/13, se le solicitó presentara nuevamente:

- *Las aclaraciones que a su derecho convinieran.*

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 339 y 351 del Reglamento de Fiscalización.

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/7154/13, del 19 de agosto de 2013, recibido por el partido en mismo día.

Al respecto, con escrito SFA/530/13, del 26 de agosto de 2013, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

‘Respecto a la presente observación se hacen las siguientes aclaraciones solicitadas por la autoridad electoral:

En cuanto a los proveedores señalados con (B) se indica a la autoridad electoral que al no conocer la documentación que le fue proporcionada por cada uno de ellos, es decir, número de facturas, fechas e importes, y a partir de la cual se determinaron las diferencias observadas, este partido se sitúa en un estado de indefensión, toda vez que al no contar con dicha información

no es posible adivinar o determinar cuáles son aquellas facturas no reportadas por los proveedores y así poder dar una respuesta satisfactoria a la autoridad electoral.”

Es importante recalcar, que el oficio de primera vuelta UF-DA/6425/13, del 28 de junio de 2013, la autoridad electoral entregó un anexo el cual sólo contiene de manera global las diferencias determinadas, en esta segunda ocasión con oficio UF-DA/7154/13, la Unidad de Fiscalización entregó un nuevo anexo el cual contiene relacionada más información, sin embargo, no contiene datos (ejemplo, entidad, concepto de factura) que son necesarios para la conciliación de las diferencias en comento.

Por lo tanto, se solicita nuevamente a esa autoridad electoral proporcionara los elementos necesarios para poder conciliar y hacer las aclaraciones, como es, copia simple de las facturas que en los escritos de respuesta a las confirmaciones los proveedores adjuntaron.

Por lo que respecta a los proveedores señalados con (C) es preciso aclarar que como Partido Político no tenemos injerencia en las actividades operativas o administrativas que realizaron cada uno de ellos, por lo cual no estamos en posibilidades de conocer las razones o motivos por los que cada uno no ha dado contestación a la autoridad electoral. Sin embargo, con la finalidad de apoyar a la autoridad electoral nos hemos dado a la tarea de intentar contactar a cada proveedor a fin de que haga llegar su contestación a dicha autoridad a la brevedad.

Respecto al párrafo anterior, es importante aclarar que aun cuando la autoridad electoral determine diferencias, en todos los casos el importe reportado por mi partido en los registros contables es mayor al reportado por los proveedores, lo cual, hace obvio el hecho de que hemos reportado el total de operaciones efectuadas, no así los proveedores.

Es importante aclarar que el proveedor Jefatura de Policía Ind del Edo de Mex y/o Cuerpo de Guardias de Seg Ind Bancaria y Com del Valle´ en nuestros registros contables, se encontró registrado en la campaña presidencial a la cuenta 200-2014-0001-0060 un importe de \$17,550,372.23; sin embargo, la diferencia, al no contar con más elementos nos es imposible conciliarla. Se informa que la documentación relativa al saldo encontrado, fue entregada en tiempo y forma a la Unidad de Fiscalización, durante el periodo de revisión del Informe de Campaña en comento, misma que en este momento se encuentra debidamente dictaminada por parte de la Autoridad electoral.’

**CONSEJO GENERAL
P-UFRPP 56/13**

*De la verificación a las aclaraciones presentadas por el partido, se determinó lo que se describe a continuación:
(...)*

*En cuanto a los proveedores marcados con (5), en la columna “REFERENCIA PARA DICTAMEN”, del **Anexo 25** del presente Dictamen, en seguimiento a las solicitudes de información que esta Unidad de Fiscalización realizó con los proveedores y prestadores de servicios, se determinó que a la fecha de elaboración del citado Dictamen, fueron presentados 25 oficios de respuesta de los proveedores, determinándose diferencias contra lo registrado contablemente, como se detalla a continuación:*

No.	NOMBRE DE PROVEEDOR Y/O PRESTADOR DE SERVICIOS	NO. DE OFICIO	FECHA	SALDO SEGÚN AUXILIARES CONTABLES (A)	NO. FACTURAS PRESENTADAS POR PROVEEDOR (B)	SALDO REPORTADO POR EL PROVEEDOR (C)	DIFERENCIAS DETERMINADAS POR AUDITORIA D= (C) - (A)	REF. PARA DICTAMEN
1	Instituto Internacional de Estudios en Prospectiva y Estrategia liepe A.C.	UF-DA/5463/13	30-05-13	27,526,978.88	33	25,118,199.08	-2,408,779.80	
2	García Landa Becerril & Asociados, S.C.	UF-DA/5464/13	30-05-13	22,143,170.69	12	21,999,413.90	-143,756.79	
3	APS Estrategia, S.C.	UF-DA/5470/13	30-05-13	14,231,977.96	20	13,071,977.96	-1,160,000.00	
4	Promotion 595, S.A. de C.V.	UF-DA/5479/13	30-05-13	9,280,000.00	9	6,960,000.00	-2,320,000.00	
5	José Agustín Corona Quintero	UF-DA/5482/13	30-05-13	8,605,630.06	6	7,850,029.00	-755,601.06	
6	AGC Asesores en Grupos & Convenciones S.A. de C.V.	UF-DA/5488/13	30-05-13	6,557,322.95	68	6,494,399.20	-62,923.75	
7	Viajes Escalona, S.A.	UF-DA/5500/13	30-05-13	3,622,411.20	10	1,793,683.19	-1,828,728.01	
8	Advanced Business Systems S.A. de C.V.	UF-DA/5509/13	30-05-13	2,421,900.24	11	2,195,680.90	-226,219.34	
9	Especialistas en Medios S.A. de C.V.	UF-DA/5524/13	30-05-13	1,160,000.00	7	1,463,920.00	303,920.00	(A)
10	Propaganda Integral Prim S.A. de C.V.	UF-DA/5530/13	30-05-13	1,015,000.00	7	1,311,960.00	296,960.00	(A)
11	C-SercomP de México S.A. de C.V.	UF-DA/5539/13	30-05-13	692,603.63	13	717,931.83	25,328.20	(A)
12	Hotel Parque Sante Fe S.A. de C.V.	UF-DA/5549/13	30-05-13	619,123.14	4	590,479.59	-28,643.55	
13	Juan Federico Zarate Avendaño	UF-DA/5559/13	30-05-13	502,797.89	6	339,316.54	-163,481.35	
14	Seguros Banorte Generali S.A. de C.V.	UF-DA/5568/13	30-05-13	466,876.38	5	113,433.83	-353,442.55	
15	Demotecnia División Análisis, S.C.	UF-DA/5570/13	30-05-13	435,000.00	11	1,885,000.00	1,450,000.00	(A)
16	Lava Tap, S.A. de C.V.	UF-DA/5575/13	30-05-13	418,209.00	12	500,049.10	81,840.10	(A)
17	Transportadora de Protección y Seguridad S.A. de C.V.	UF-DA/5576/13	30-05-13	2,406,280.61	10	2,500,197.82	93,917.21	(A)
18	Hr Mc Hotel Compañy S. de R.L. de C.V.	UF-DA/5590/13	30-05-13	229,512.00	3	277,911.80	48,399.80	(A)
19	El Universal Compañía Periodística Nacional S.A. de C.V.	UF-DA/5593/13	30-05-13	213,373.77	22	443,275.10	229,901.33	(A)
20	Turística Cádiz, S.A. de C.V.	UF-DA/5597/13	30-05-13	200,949.36	11	22,066.36	-178,883.00	
21	Sergio Real Field	UF-DA/5602/13	30-05-13	307,413.91	35	335,535.25	28,121.34	(A)
22	Elba Debernardi González	UF-DA/5604/13	30-05-13	300,000.00	10	250,000.00	-50,000.00	
23	Abraham Guemez Castillo	UF-DA/5621/13	30-05-13	525,000.00	12	465,000.00	-60,000.00	
24	María Estela Mendoza Batalla	UF-DA/5641/13	30-05-13	413,747.90	511	647,325.30	233,577.40	(A)
25	Álvaro Francisco Alberto Solís	UF-DA/5643/13	30-05-13	380,000.00	12	360,000.00	-20,000.00	
TOTAL				104,675,279.57	400	97,706,785.75	-6,968,493.82	

Las diferencias detalladas en el cuadro que antecede fueron notificadas al partido mediante oficio UF-DA/7154/13, las cuales fueron referenciadas con (B),

en la columna Referencia del Anexo 1 del citado oficio, por otra parte, si bien es claro que el partido manifestó que esta Unidad de Fiscalización no presentó el detalle de las facturas que formaron parte de la diferencia en comento, esto no lo exime de haber presentado las aclaraciones, así como la documentación soporte para en su caso, dar por atendida la observación.

Por otra parte, como se puede observar, los proveedores marcados con (A), en la columna 'REFERENCIA PARA DICTAMEN', del cuadro que antecede, reportaron un saldo mayor por \$2,791,965.38, al reportado por el partido en sus registros contables, por tal motivo, la observación quedó no subsanada.

*Respecto de lo anterior, se concluye que de lo descrito previamente, la autoridad electoral no tuvo los elementos suficientes para verificar que los reportados por el partido político respecto de las operaciones llevadas a cabo con diversos proveedores hayan sido reportadas en su totalidad toda vez que éstos confirmaron operaciones por montos mayores, por lo que se hace necesarios que la autoridad electoral, en ejercicio de sus facultades, ordene el inicio de una investigación formal mediante un procedimiento que cumpla con todas las formalidades esenciales previstas en el texto constitucional.
(...)*

En consecuencia, al observarse saldos reportados por 10 proveedores, los cuales fueron mayores a lo registrado contablemente por el partido, se propone el inicio de un procedimiento oficioso, con la finalidad de determinar si el partido político se apegó a la normatividad aplicable, respecto del origen y destino de los recursos. Lo anterior con fundamento en los artículos 77, numeral 6; 81, numeral 1, incisos c) y o); 118, numeral 1, incisos h) w) y z); y 361 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.”

II. Acuerdo de inicio. El ocho de octubre de dos mil trece, la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos (en adelante Unidad de Fiscalización) acordó integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de expediente, y publicar el acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en los estrados de este Instituto. (Foja 14 del expediente)

III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio.

- a) El ocho de octubre de dos mil trece, la Unidad de Fiscalización fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 15-16 del expediente)

- b) El once de octubre de dos mil trece, se retiraron del lugar que ocupa los estrados de la Unidad de Fiscalización, el citado acuerdo de inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente en los estrados de este Instituto. (Foja 17 del expediente)

IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo General. El ocho de octubre de dos mil trece, mediante oficio UF/DRN/8331/2013, la Unidad de Fiscalización comunicó al Secretario del Consejo General del Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 18 del expediente)

V. Notificación del inicio del procedimiento oficioso al Partido Revolucionario Institucional. El ocho de octubre de dos mil trece, mediante oficio UF/DRN/8334/2013, la Unidad de Fiscalización notificó al Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 19 del expediente)

VI. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en lo sucesivo Dirección de Auditoría).

- a) El diez de octubre de dos mil trece, mediante oficio UF/DRN/328/2013, la Dirección de Resoluciones y Normatividad (en adelante Dirección de Resoluciones), requirió a la Dirección de Auditoría, para que proporcionara la documentación soporte de la conclusión 101 del Dictamen Consolidado. (Fojas 20-21 del expediente)
- b) El dieciséis de octubre de dos mil trece, mediante oficio UF-DA/234/13, la Dirección de Auditoría dio respuesta exhibiendo en copia simple la documentación presentada por los 10 proveedores que reportaron saldos superiores a lo registrado contablemente por el Partido Revolucionario Institucional, derivado de la revisión del Informe Anual 2012, consistente en solicitud a proveedores, escritos de respuesta, facturas y contratos. (Fojas 22-278 del expediente)
- c) El once de marzo de dos mil catorce, mediante oficio UF/DRN/060/2014, la Dirección de Resoluciones, requirió a la Dirección de Auditoría, para que proporcionara documentación relacionada con las facturas expedidas por la persona moral Especialistas en Medios S.A. de C.V. (Fojas 1524-1525 del expediente)

- d) El veintidós de mayo de dos mil catorce, mediante oficio UF/DRN/067/2014, la Dirección de Resoluciones, requirió a la Dirección de Auditoría, para que proporcionara documentación relacionada con las facturas expedidas por la C. María Estela Mendoza Batalla. (Fojas 1911-1913 del expediente)
- e) El nueve de junio de dos mil catorce, mediante oficio UF-DA/012/14, la Dirección de Auditoría dio respuesta, en el que informó que del total de facturas presentadas por el proveedor, únicamente se localizó el registro de 35 de ellas, identificando la póliza contable, así como el número de cheque expedido por el partido político para el pago de las mismas. Asimismo, remitió copia simple del auxiliar contable, así como de los estados de cuenta bancarios correspondientes. (Fojas 1922-1925 del expediente).
- f) El veintitrés de junio de dos mil catorce, mediante oficio UF/DRN/058/2014, la Dirección de Resoluciones, requirió a la Dirección de Auditoría, para que proporcionara documentación relacionada con las facturas expedidas por la C. María Estela Mendoza Batalla. (Fojas 1955-1956 del expediente)
- g) El dieciocho de julio de dos mil catorce, mediante oficio INE/UTF/DRN/081/2014, la Dirección de Resoluciones, requirió a la Dirección de Auditoría, para que proporcionara documentación relacionada con las facturas expedidas por la persona moral denominada Especialistas en Medios S.A. de C.V. (Fojas 1957-1958 del expediente)
- h) El veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, mediante oficio INE/UTF/DA/084/2014, la Dirección de Auditoría dio respuesta al oficio INE/UTF/DRN/081/2014, en el que informó que del total de facturas presentadas por el proveedor, únicamente se localizó el registro de 2 de ellas. Asimismo, remitió copia simple del auxiliar contable, así como de la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2012. (Fojas 2028-2046 del expediente)
- i) El veintitrés de septiembre de dos mil catorce, mediante oficio UF/DRN/149/2014, la Dirección de Resoluciones, requirió a la Dirección de Auditoría, para que proporcionara documentación relacionada con las facturas expedidas por la persona moral HR MC Hotel Company, S. de R.L. de C.V. (Fojas 2000-2001 del expediente)
- j) El siete de octubre de dos mil catorce, mediante oficio INE/UTF/DA/095/2014, la Dirección de Auditoría dio respuesta al oficio INE/UTF/DRN/149/2014, en el que informó que se localizó el registro de 2 facturas en el informe anual

correspondiente al 2012. Asimismo, remitió copia simple del auxiliar contable, así como del estado de cuenta en el que se identifica el pago realizado al proveedor. (Fojas 2047-2055 del expediente)

- k) El veintitrés de octubre de dos mil catorce, mediante oficio INE/UTF/DRN/199/2014, la Dirección de Resoluciones, requirió a la Dirección de Auditoría, para que proporcionara documentación relacionada con el pago las facturas expedidas por la C. María Estela Mendoza Batalla. (Fojas 2056-2057 del expediente)
- l) El veinticinco de noviembre de dos mil catorce, mediante oficio INE/UTF/DA/179/14, la Dirección de Auditoría dio respuesta al oficio INE/UTF/DRN/199/2014 e informó que la revisión de las partidas fue de carácter aleatorio, por lo cual no cuentan con la totalidad de los cheques solicitados. Asimismo, remitió copia simple de los estados de cuenta bancarios en los que se puede identificar el cobro de los cheques en comento. (Fojas 2060-2105 del expediente)
- m) El veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, mediante oficio INE/UTF/DRN/264/2014, la Dirección de Resoluciones requirió a la Dirección de Auditoría, para que proporcionara documentación relacionada con las facturas expedidas por la persona moral denominada LAVA TAP, S.A. de C.V. (Fojas 2058-2059 del expediente)
- n) El diecisiete de diciembre de dos mil catorce, mediante oficio INE/UTF/DA/216/2014, la Dirección de Auditoría dio respuesta al oficio INE/UTF/DRN/264/2014, en el que informó que la factura 8973 fue reportada en la revisión del informe anual 2012, mientras que la factura 18491 no fue localizada en los gastos correspondientes al ejercicio 2013. (Fojas 2106-2135 del expediente)
- o) El diez de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/155/2017, la Dirección de Resoluciones requirió a la Dirección de Auditoría, para que informara respecto a operaciones realizadas por el Partido Revolucionario Institucional. (Fojas 2351-2352 del expediente)
- p) El veintidós de marzo de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/174/2016, la Dirección de Resoluciones requirió a la Dirección de Auditoría, para que informara respecto a algunas inconsistencias relacionadas

con las operaciones realizadas por el instituto político. (Fojas 2276-2278 del expediente)

- q) El siete de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/207/2017, la Dirección de Resoluciones requirió a la Dirección de Auditoría, para que informara respecto a operaciones realizadas por el Partido Revolucionario Institucional. (Fojas 2353-2354 del expediente)
- r) El veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DA-L/087/17, la Dirección de Auditoría dio respuesta al oficio INE/UTF/DRN/207/2017, en el que proporciona la información solicitada. (Fojas 2355-2357 del expediente)

VII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y requerimiento de información al Partido Revolucionario Institucional.

- a) El veintidós de noviembre de dos mil trece, mediante oficio UF/DRN/9141/2013, la Unidad de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito y se requirió al Representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General, confirmara y presentara la documentación relativa al total de operaciones realizadas con los proveedores que reportaron saldos superiores a lo registrado contablemente por dicho instituto político en el informe anual 2012. (Fojas 279-281 del expediente)
- b) El veintinueve de noviembre de dos mil trece, mediante escrito sin número el partido en cuestión solicitó una prórroga para la entrega de la información y documentación requerida. (Fojas 282-283 del expediente)
- c) El cuatro de diciembre de dos mil trece, mediante oficio UF/DRN/10130/2013, la Unidad de Fiscalización concedió la prórroga solicitada. (Foja 285 del expediente)
- d) El nueve de diciembre de dos mil trece, mediante escrito sin número signado por el Representante del Partido Revolucionario Institucional, dio respuesta al requerimiento de mérito manifestando que presentaba copia simple de los cheques y/o transferencias, así como de las facturas de los proveedores relacionados con la observación y realizando diversas manifestaciones en relación a las diferencias entre lo reportado por los proveedores y su representada. (Fojas 287-455 del expediente)

- e) El veinte de enero de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/0293/2015, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General, informara respecto a la diferencia en facturas proporcionadas por su partido político en el informe anual 2012. (Fojas 2161-2166 del expediente)
- f) El veintiséis de enero de dos mil quince, mediante escrito sin número signado por el Representante del Partido Revolucionario Institucional, dio respuesta la solicitud de mérito, formulando diversas precisiones en relación a las operaciones observadas y remitiendo documentación. (Fojas 2167-2233 del expediente)
- g) El veinticuatro de febrero de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/2962/2015, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General, informara respecto a la diferencia entre el pago realizado y el monto de distintas facturas, así como el detalle de las operaciones realizadas con la C. María Estela Mendoza Batalla. (Fojas 2238-2242 del expediente)
- h) El tres de marzo de dos mil quince, mediante escrito sin número signado por el Representante del Partido Revolucionario Institucional, dio respuesta la solicitud de mérito, formulando diversas aclaraciones en relación a las operaciones observadas y anexando documentación. (Fojas 2243-2269 del expediente)
- i) El treinta de mayo de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/13557/2016, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General, informara respecto a la diferencia entre el pago realizado y el monto de distintas facturas, así como el detalle de las operaciones consistentes en arrendamiento de vehículos. (Fojas 2329-2332 del expediente)
- j) El seis de junio de dos mil dieciséis, mediante escrito sin número signado por el Representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, dio respuesta la solicitud realizada por medio del oficio INE/UTF/DRN/13557/2016 formulando diversas aclaraciones en relación a las operaciones señaladas (Fojas 2333-2340 del expediente)

VIII. Ampliación del plazo para resolver.

- a) El cuatro de diciembre de dos mil trece, dada la naturaleza de las pruebas ofrecidas y de las investigaciones que debían realizarse para substanciar adecuadamente el procedimiento que por esta vía se resuelve, el Director General de la Unidad de Fiscalización, emitió el Acuerdo por el que se amplió el plazo para presentar a este Consejo General el respectivo Proyecto de Resolución. (Foja 284 del expediente)
- b) El cuatro de diciembre de dos mil trece, mediante oficio UF/DRN/10134/13, la Unidad de Fiscalización hizo del conocimiento del Secretario del Consejo General del Instituto el acuerdo antes mencionado. (Foja 286 del expediente)

IX. Requerimiento de información al Representante y/o Apoderado Legal de Especialistas en Medios, S. A. de C. V.

- a) El veintitrés de enero de dos mil catorce, mediante oficio UF/DRN/0344/2014, la Unidad de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del entonces Distrito Federal realizara la notificación del oficio UF/DRN/0345/2014 al Representante y/o Apoderado Legal de Especialistas en Medios, S.A. de C.V. a efecto que proporcionara información relacionada con dos facturas expedidas a nombre del Partido Revolucionario Institucional. (Fojas 456-457 del expediente)
- b) El seis de febrero de dos mil catorce, la representante legal de la persona moral requerida dio contestación a lo solicitado, remitiendo la documentación con la que acredita las operaciones realizadas con el partido incoado por los servicios prestados. (Fojas 552-983 del expediente)
- c) El veintidós de agosto de dos mil catorce, mediante oficio INE/UTF/DRN/1508/2014, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del entonces Distrito Federal realizara la notificación del oficio INE/UTF/DRN/1509/2014 por el cual se requirió al representante y/o apoderado legal de Especialistas en Medios, S.A. de C.V., proporcionara información relacionada con dos facturas expedidas a nombre del Partido Revolucionario Institucional. (Fojas 1959-1960 del expediente)
- d) Mediante oficio INE/JLE-DF/04047/2014, el Vocal referido remitió las constancias de notificación del oficio INE/UTF/DRN/1509/2014, notificado el cuatro de septiembre de dos mil catorce. (Foja 2006 del expediente).

- e) El diez de septiembre de dos mil catorce, la representante legal de la persona moral requerida dio contestación a lo solicitado, informando que la factura No. 1881 sufrió un descuento y la factura No. 3107 fue cancelada, proporcionando documentación para sustentar su dicho. (Fojas 1961-1989 del expediente).

X. Requerimiento realizado al Representante y/o Apoderado Legal de Propaganda Integral Prim, S. A. de C. V.

- a) El veintitrés de enero de dos mil catorce, mediante oficio UF/DRN/0344/2014, la Unidad de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del entonces Distrito Federal realizara la notificación del oficio UF/DRN/0346/2014 por medio del cual se requirió al representante y/o apoderado legal de Propaganda Integral Prim, S.A. de C.V., proporcionara información relacionada con las operaciones realizadas entre su representada y el partido político incoado. (Fojas 456-457 del expediente).
- b) El cinco de febrero de dos mil catorce, la representante legal de la persona moral requerida dio contestación a lo solicitado, remitiendo la documentación con la que acredita las operaciones realizadas con el partido incoado por los servicios prestados. (Fojas 518-551 del expediente)

XI. Requerimiento realizado al Representante y/o Apoderado Legal de C-Sercom de México, S. A. de C. V.

- a) El veintitrés de enero de dos mil catorce, mediante oficio UF/DRN/0344/2014, la Unidad de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del entonces Distrito Federal realizara la notificación del oficio UF/DRN/0347/2014 mediante el cual se requirió al representante y/o apoderado legal de C-Sercom de México, S.A. de C.V., proporcionara información relacionada con las operaciones realizadas entre su representada y el partido político incoado. (Fojas 471-473 del expediente).
- b) El treinta y uno de enero de dos mil catorce, la representante legal de la persona moral requerida dio contestación a lo solicitado, remitiendo la documentación con la que acredita las operaciones realizadas con el partido incoado por los servicios prestados. (Fojas 468-515 del expediente).

XII. Requerimiento realizado al Representante y/o Apoderado Legal de Demotecnia División Análisis S. C.

- a) El veintitrés de enero de dos mil catorce, mediante oficio UF/DRN/0344/2014, la Unidad de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del entonces Distrito Federal realizara la notificación del oficio UF/DRN/0348/2014 por medio del cual se requirió al Representante y/o Apoderado Legal de Demotecnia División Análisis S. C. a efecto que proporcionara información relacionada con las operaciones realizadas entre su representada y el partido político incoado (Fojas 456-457 del expediente).
- b) El once de febrero de dos mil catorce, el representante legal de la persona moral requerida dio contestación a lo solicitado, remitiendo la documentación con la que acredita las operaciones realizadas con el partido incoado por los servicios prestados. (Fojas 1120-1210 del expediente).

XIII. Requerimiento realizado al Representante y/o Apoderado Legal de Lava Tap, S.A. de C.V.

- a) El veintitrés de enero de dos mil catorce, mediante oficio UF/DRN/0344/2014, la Unidad de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del entonces Distrito Federal realizara la notificación del oficio UF/DRN/0349/2014 mediante el cual se requirió al representante y/o apoderado legal de Lava Tap, S.A. de C.V., proporcionara información relacionada con las operaciones realizadas entre su representada y el partido político incoado. (Fojas 456-457 del expediente).
- b) El trece de marzo de dos mil catorce, el representante legal de la persona moral requerida dio contestación a lo solicitado, remitiendo la documentación con la que acredita las operaciones realizadas con el partido incoado por los servicios prestados. (Fojas 1526- 1609 del expediente).

XIV. Requerimiento realizado al Representante y/o Apoderado Legal de HR MC Hotel Company S. de R.L. de C.V.

- a) El veintitrés de enero de dos mil catorce, mediante oficio UF/DRN/0344/2014, la Unidad de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del entonces Distrito Federal realizara la notificación del oficio UF/DRN/0350/2014 mediante el cual se requirió al representante y/o apoderado legal de Hr Mc Hotel Company S. de R.L. de C.V., proporcionara información

relacionada con las operaciones realizadas entre su representada y el partido político incoado. (Fojas 456-457 del expediente).

- b) El veinticuatro de febrero de dos mil catorce, el representante legal de la persona moral requerida dio contestación a lo solicitado, remitiendo la documentación con la que acredita las operaciones realizadas con el partido incoado por los servicios prestados. (Fojas 1426-1523 del expediente).
- c) El veintitrés de enero de dos mil catorce, mediante oficio UF/DRN/0369/2014, la Unidad de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del entonces Distrito Federal realizara la notificación del oficio UF/DRN/0370/2014. (Foja 1730-1731 del expediente).
- d) El veintiuno de mayo de dos mil catorce, el representante legal de la persona moral requerida dio contestación a lo solicitado, remitiendo la documentación con la que acredita las operaciones realizadas con el partido incoado por los servicios prestados. (Fojas 1732-1910 del expediente).
- e) El veintidós de agosto de dos mil catorce, mediante oficio INE/UTF/DRN/1508/2014, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Distrito Federal del Instituto Nacional Electoral realizara la notificación del oficio INE/UTF/DRN/1510/2014. (Fojas 1959-1960 del expediente).
- f) Mediante oficio INE/UTF/DRN/1510/2014, notificado el cinco de septiembre de dos mil catorce, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió al representante y/o apoderado legal de HR MC Hotel Company S. de R.L. de C.V., proporcionara información relacionada con el pago de facturas expedidas a nombre del Partido Revolucionario Institucional. (Fojas 2015-2017 del expediente).
- g) El once de septiembre de dos mil catorce, el representante legal de la persona moral requerida dio contestación a lo solicitado, informando que el pago por la cantidad de \$80,862.53 se derivó de la prestación de un servicio consistente en un evento social, proporcionando documentación para sustentar su dicho. (Fojas 1972-1989 del expediente).

XV. Requerimiento realizado al Representante y/o Apoderado Legal de El Universal Compañía Periodística Nacional S.A. de C.V.

- a) El veintitrés de enero de dos mil catorce, mediante oficio UF/DRN/0344/2014, la Unidad de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Distrito Federal del entonces Instituto Federal Electoral realizara la notificación del oficio UF/DRN/0351/2014 mediante el cual se requirió al representante y/o apoderado legal de El Universal Compañía Periodística Nacional, S.A. de C.V., proporcionara información relacionada con las operaciones realizadas entre su representada y el partido político incoado. (Fojas 456-457 del expediente).
- b) El once de febrero de dos mil catorce, el representante legal de la persona moral requerida dio contestación a lo solicitado, remitiendo la documentación con la que acredita las operaciones realizadas con el partido incoado por los servicios prestados. (Fojas 1211-1341 del expediente).

XVI. Requerimiento realizado al Lic. Sergio Rea Field.

- a) El veintitrés de enero de dos mil catorce, mediante oficio UF/DRN/0344/2014, la Unidad de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Distrito Federal del entonces Instituto Federal Electoral realizara la notificación del oficio UF/DRN/0352/2014 mediante el cual se requirió al Lic. Sergio Rea Field, proporcionara información relacionada con las operaciones realizadas entre su representada y el partido político incoado. (Fojas 456-457 del expediente)
- b) El doce de febrero de dos mil catorce, el representante legal de la persona moral requerida dio contestación a lo solicitado, remitiendo la documentación con la que acredita las operaciones realizadas con el partido incoado por los servicios prestados. (Fojas 1342-1406 del expediente).
- c) El diecisiete de septiembre de dos mil catorce, mediante oficio INE/UTF/DRN/1508/2014, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Distrito Federal del Instituto Nacional Electoral realizara la notificación del oficio INE/UTF/DRN/1511/2014. (Fojas 1959-1960 del expediente).
- d) Mediante oficio INE/UTF/DRN/1511/2014, notificado el nueve de septiembre de dos mil catorce, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió al Lic. Sergio Rea

Field, proporcionara información relacionada con el pago de una factura expedida a nombre del Partido Revolucionario Institucional. (Fojas 2023-2025 del expediente).

- e) El diecisiete de septiembre de dos mil catorce, el Lic. Sergio Rea Field dio contestación a lo solicitado, informando que la factura 3885 fue pagada con el cheque 15266, proporcionando documentación para sustentar su dicho. (Fojas 1990-1996 del expediente).

XVII. Requerimiento realizado a la C. María Esthela Mendoza Batalla.

- a) El veintitrés de enero de dos mil catorce, mediante oficio UF/DRN/0344/2014, la Unidad de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Distrito Federal del entonces Instituto Federal Electoral realizara la notificación del oficio UF/DRN/0353/2014. (Fojas 456-457 del expediente).
- b) Mediante oficio UF/DRN/0353/2014, notificado el dieciocho de febrero de dos mil catorce, la Unidad de Fiscalización requirió a la C. María Estela Mendoza Batalla, proporcionara información relacionada con las operaciones realizadas entre su representada y el partido político incoado. (Fojas 1656-1659 del expediente).
- c) El diez de abril de dos mil catorce, la ciudadana requerida dio contestación a lo solicitado, remitiendo la documentación con la que acredita las operaciones realizadas con el partido incoado por los servicios prestados. (Fojas 1663-1665 del expediente).

XVIII. Requerimiento realizado al Representante y/o Apoderado Legal de Transportadora de Protección y Seguridad S.A. de C.V

- a) El veinticuatro de enero de dos mil catorce, mediante oficio UF/DRN/0354/2014, la Unidad de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Nuevo León del entonces Instituto Federal Electoral realizara la notificación del oficio UF/DRN/0355/2014. (Fojas 456-457 del expediente).
- b) Mediante oficio UF/DRN/0355/2014, notificado el veintinueve de enero de dos mil catorce, la Unidad de Fiscalización requirió al representante y/o apoderado legal de Transportadora de Protección y Seguridad, S.A. de C.V., proporcionara información relacionada con las operaciones realizadas entre su representada y el partido político incoado. (Fojas 461-463 del expediente).

- c) El diez de febrero de dos mil catorce, el representante legal de la persona moral requerida dio contestación a lo solicitado, remitiendo la documentación con la que acredita las operaciones realizadas con el partido incoado por los servicios prestados. (Fojas 984-1119 del expediente).

XIX. Solicitud de información realizada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

- a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/3393/2014, del diecinueve de diciembre de dos mil catorce, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la mencionada Comisión, diversa información y documentación relativa al procedimiento de mérito, consistente en cheques y estados de cuenta relacionados con las operaciones observadas. (Fojas 2136-2139 del expediente).
- b) Mediante oficios 214-4/878021/2015 y 214-4/883048/2015 de fechas doce de enero y 14 de enero de 2015 respectivamente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió a la Unidad de Fiscalización la respuesta a la solicitud descrita en el inciso que antecede. (Fojas 2140-2160 del expediente).

XX. Solicitud de información realizada a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral (en adelante Dirección Jurídica).

- a) El veintitrés de febrero de dos mil quince, la Dirección de Resoluciones y Normatividad (en adelante Dirección de Resoluciones), mediante oficio INE/UTF/DRN/1540/2015 requirió a la Dirección Jurídica, para que proporcionara la identificación y búsqueda del registro de los C.C. Alfonso de Atocha Araujo López y Alejandra Tapia Mendoza. (Fojas 2234-2235 del expediente).
- b) El veinticinco de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica dio respuesta mediante oficio INE/DC/0277/15 proporcionando la información solicitada. (Foja 2236 del expediente).
- c) El veintiséis de marzo de dos mil quince, la Dirección de Resoluciones, mediante oficio INE/UTF/DRN/6260/2015 requirió a la Dirección Jurídica, para que proporcionara la identificación y búsqueda del registro la C. Alejandra Tapia Mendoza. (Fojas 2279-2280 del expediente).

- d) El treinta de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica dio respuesta mediante oficio INE/DC/SC/0400/15 proporcionando la información solicitada. (Foja 2281 del expediente).
- e) El quince de agosto de dos mil diecisiete, la Dirección de Resoluciones, mediante oficio INE/UTF/DRN/12333/2017 requirió a la Dirección Jurídica, para que proporcionara la identificación y búsqueda del registro la C. Lesley Chimal Leal. (Foja 2373 del expediente).
- f) El dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, la Dirección Jurídica dio respuesta mediante oficio INE/DJ/DSL/SSL/20073/2017 indicando que no se localizó registro alguno de la ciudadana solicitada. (Foja 2374 del expediente).
- g) El trece de octubre de dos mil diecisiete, la Dirección de Resoluciones, mediante oficio INE/UTF/DRN/473/2017 requirió a la Dirección Jurídica, para que proporcionara la identificación y búsqueda del registro del C. Alfonso de Atocha Araujo López. (Fojas 2377-2378 del expediente).
- h) El dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, la Dirección Jurídica dio respuesta mediante oficio INE-DSL/SSL/25263/2017 remitiendo la información solicitada. (Foja 2379 del expediente).

XXI. Requerimiento realizado a la C. Alejandra Tapia Mendoza.

- a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/8472/2015 de veintinueve de abril de dos mil quince, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Distrito Federal del Instituto Federal Electoral realizara la notificación del oficio INE/UTF/DRN/8470/2015. (Fojas 2282-2283 del expediente).
- b) Mediante oficio INE/UTF/DRN/8470/2015, notificado el primero de mayo de dos mil quince, la Unidad de Fiscalización requirió a la C. Alejandra Tapia Mendoza, proporcionara información relacionada con el cobro de cheques expedidos por el Partido Revolucionario Institucional a favor de la C. María Estela Mendoza Batalla. (Fojas 2285-2286 del expediente).
- c) El seis de mayo de dos mil quince, la ciudadana requerida dio contestación a lo solicitado, refiriendo que el cobro de los cheques a nombre de la C. María Estela Mendoza batalla, se debe a un cobro entre particulares. (Fojas 2301-2302 del expediente).

XXII. Requerimiento realizado al C. Alfonso de Atocha Araujo López.

- a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/8472/2015 de veintinueve de abril de dos mil quince, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Distrito Federal del Instituto Federal Electoral realizara la notificación del oficio INE/UTF/DRN/8471/2015. (Fojas 2282-2283 del expediente).
- b) Mediante oficio INE/UTF/DRN/8471/2015, notificado por estrados el treinta de abril de dos mil quince, la Unidad de Fiscalización requirió al C. Alfonso de Atocha Araujo López, proporcionara información relacionada con el cobro de cheques expedidos por el Partido Revolucionario Institucional a favor de la C. María Estela Mendoza Batalla. (Fojas 2297-2298 del expediente).
- c) Mediante acuerdo de fecha doce de julio de dos mil diecisiete, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México del Instituto Federal Electoral, requiriera al C. Alfonso de Atocha Araujo López para que proporcionara información relacionada con el cobro de cheques expedidos por el Partido Revolucionario Institucional a favor de la C. María Estela Mendoza Batalla. (Fojas 2358-2359 del expediente).
- d) Mediante oficio INE/JLE-CM/04745/2017, notificado por estrados el dieciocho de julio de dos mil diecisiete, la Unidad de Fiscalización requirió al C. Alfonso de Atocha Araujo López, proporcionara información relacionada con el cobro de cheques expedidos por el Partido Revolucionario Institucional a favor de la C. María Estela Mendoza Batalla. (Fojas 2367-2368 del expediente).
- e) Mediante acuerdo de fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México del Instituto Federal Electoral, requiriera al C. Alfonso de Atocha Araujo López para que proporcionara información relacionada con el cobro de cheques expedidos por el Partido Revolucionario Institucional a favor de la C. María Estela Mendoza Batalla. (Fojas 2386-2387 del expediente).
- f) Mediante oficio INE/JLE-CM/01696/2018, notificado por estrados el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad de Fiscalización requirió al C. Alfonso de Atocha Araujo López, proporcionara información relacionada con el cobro de cheques expedidos por el Partido Revolucionario Institucional a favor de la C. María Estela Mendoza Batalla. (Fojas 2396-2400 del expediente).

XXIII. Solicitud realizado al Administrador General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en adelante Servicio de Administración Tributaria).

- a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/13752/2015 de cuatro de junio de dos mil quince, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Servicio de Administración Tributaria, datos del C. Alfonso de Atocha Araujo López. (Fojas 2270-2271 del expediente).
- b) Mediante oficio 103-05-2015-0622 de nueve de junio de dos mil quince respectivamente, la dependencia dio respuesta a la solicitud descrita en el inciso que antecede. (Foja 2272 del expediente).
- c) Mediante oficio INE/UTF/DRN/2447/2018 de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Servicio de Administración Tributaria, datos de la C. Lesley Chimal Leal. (Foja 2382 del expediente).
- d) Mediante oficio 103-05-2018-0062 de veinticinco de enero de dos mil dieciocho respectivamente, el Servicio de Administración Tributaria dio respuesta a la solicitud descrita en el inciso que antecede. (Fojas 2383-2385 del expediente).
- e) Mediante oficio INE/UTF/DRN/23317/2018 de cuatro de abril de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Servicio de Administración Tributaria, actualizara los datos del C. Alfonso de Atocha Araujo López todavez que no fue posible localizarlo en el primer domicilio. (Foja 2401 del expediente).
- f) Mediante oficio 103-05-04-2018-081 de once de abril de dos mil dieciocho respectivamente, se dio respuesta a la solicitud descrita en el inciso que antecede. (Fojas 2403-2404 del expediente).

XXIV. Razones y Constancias.

- a) El siete de julio de dos mil quince se hizo constar una búsqueda en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria con el propósito de verificar y validar el folio del comprobante fiscal digital identificado como "Factura B 1795" emitida por la persona moral denominada "HR MC HOTEL COMPANY S. DE R.L. DE C.V." a favor del Partido Revolucionario Institucional. (Fojas 2311 a 2312 del expediente).

- b) El seis de agosto de dos mil quince se hizo constar una búsqueda en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria con el propósito de verificar y validar el folio del comprobante fiscal digital identificado como “Factura B 1887” emitida por la persona moral denominada “HR MC HOTEL COMPANY S. DE R.L. DE C.V.” a favor del Partido Revolucionario Institucional. (Fojas 2313 a 2314 del expediente).
- c) El veintiocho de octubre de dos mil quince se hizo constar una búsqueda en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria con el propósito de verificar y validar el folio del comprobante fiscal digital identificado como “Factura A 35” emitida por la persona moral denominada “PROPAGANDA INTEGRAL PRIM, S.A. DE C.V.” a favor del Partido Revolucionario Institucional. (Fojas 2315 a 2316 del expediente).
- d) El veintinueve de enero de dos mil dieciséis se hizo constar una búsqueda en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria con el propósito de verificar y validar el folio del comprobante fiscal digital identificado como “Factura B 1794” emitida por la persona moral denominada “HR MC HOTEL COMPANY S. DE R.L. DE C.V.” a favor del Partido Revolucionario Institucional. (Fojas 2317 a 2318 del expediente).
- e) El dieciséis de agosto de dos mil dieciséis se hizo constar una búsqueda en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria con el propósito de verificar y validar el folio del comprobante fiscal digital identificado como “Factura B 1795” emitida por la persona moral denominada “HR MC HOTEL COMPANY S. DE R.L. DE C.V.” a favor del Partido Revolucionario Institucional. (Fojas 2345 a 2346 del expediente).
- f) El once de enero de dos mil diecisiete se hizo constar una búsqueda en internet de información relacionada con el proveedor Lava Tap, S.A. de C.V. (Fojas 2347 a 2348 del expediente).
- g) El trece de febrero de dos mil diecisiete se hizo constar una búsqueda en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria con el propósito de verificar y validar el folio del comprobante fiscal digital identificado como “Factura B 1887” emitida por la persona moral denominada “HR MC HOTEL COMPANY S. DE R.L. DE C.V.” a favor del Partido Revolucionario Institucional. (Fojas 2349 a 2350 del expediente).

- h) El trece de septiembre de dos mil diecisiete se hizo constar una búsqueda en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria con el propósito de verificar y validar el folio del comprobante fiscal digital identificado como “Folio 18491” emitida por la persona moral denominada “LAVA TAP, S.A. DE C.V.” a favor del Partido Revolucionario Institucional. (Fojas 2375 a 2376 del expediente).

XXV. Solicitud de información a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.

- a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/11162/2016 de seis de mayo de dos mil dieciséis, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Guerrero del Instituto Federal Electoral realizara la notificación del oficio INE/UTF/DRN/6281/2016. (Fojas 2323-2324 del expediente).
- b) Mediante oficio INE/UTF/DRN/6281/2016, notificado el nueve de mayo de dos mil dieciséis, la Unidad de Fiscalización requirió a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero, proporcionara informara si nueve facturas emitidas por la persona moral Demotecnia División de Análisis, S.C. fueron reportadas por el Partido Revolucionario Institucional. (Fojas 2325-2326 del expediente).
- c) El veinte de junio de dos mil dieciséis, la autoridad requerida dio contestación a lo solicitado, refiriendo que el Partido Revolucionario Institucional no reporto facturas expedidas por el proveedor Demotecnia División de Análisis S.C. (Fojas 2341-2344 del expediente).

XXVI. Requerimiento realizado al Comité Directivo Estatal en el estado de Guerrero del Partido Revolucionario Institucional.

- a) Mediante acuerdo de trece de mayo de dos mil dieciséis, el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Guerrero del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital correspondiente, realizará lo conducente a efecto de solicitar al Arq. José Parcero López, en su calidad de Presidente del Comité Directivo Estatal en el estado de Guerrero del Partido Revolucionario Institucional, i) Confirmar o rectificar el alcance y contenido de las facturas número 18, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 respectivamente, todas ellas expedidas por el proveedor Demotecnia División de Análisis S.C.; en su caso, detalle la presentación del

servicio que ampara cada una de las facturas materia de observación, adjuntando a su respuesta la documentación que acredite su dicho; ii) Remitir los contratos originales que amparen la prestación de los servicios vinculados con las facturas referidas anteriormente, precisando fechas de celebración, objeto y condiciones para el cumplimiento de los mismos. De ser procedente, remitir las muestras correspondientes, iii) La forma de pago de las facturas, señalando la fecha de pagos efectuados, relacionando los mismos con el proveedor, el contrato y la factura, remitir copia del soporte documental que ampare su dicho, así como la información detallada de las operaciones bancarias; señalar, iv) Informar y confirmar si reporto las operaciones citadas, en que informe y respecto a que ejercicio fue; así como si corresponde a actividades ordinarias, de campaña o de precampaña, anexando la documentación que acredite su dicho. (Fojas 2319-2321 del expediente).

- b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se ha recibido en las oficinas de las oficinas de la Unidad Técnica de Fiscalización respuesta a la solicitud formulada.

XXVII. Emplazamiento al Partido Revolucionario Institucional.

- a) El once de mayo del año dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/28438/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al Partido Revolucionario Institucional, corréndole traslado de todas las constancias que integran el expediente P-UFRPP 56/13. (Fojas 2404-2405 del expediente).
- b) El veintiuno de mayo del mismo año, el Partido Revolucionario Institucional dio contestación al emplazamiento formulado, el cual en términos de los que establece el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su parte conducente, se transcribe a continuación: (Fojas 2341-2344 del expediente).

“(…)”

*En este sentido, de las acruaziones que obran en el expediente **P-UFRPP 56/13**, se encuentra que en todo momento **mi representado se ha pronunciado en el sentido de negar la solicitrud y recepción/prestación del servicio por la realización de eventos con el proveedor “HR MC Hotel Company, S. de R.L. de C.V.” por la cantidad de \$143,808.73, y en consecuencia, no se encuentra en el supuesto de la omisión del reporte correspondiente de egresos a la autoridad fiscalizadora. Del mismo modo***

se precisa que no se tiene registro alguno de las Ordenes 37429, 37738 y 37239.

En virtud de lo anterior, mi representado desconoce la contratación de los servicios de realización de eventos que derivan de las ordenes citadas.

*Lo anterior cobra relevancia **si se considera que cualquier persona puede emitir una orden de servicio, así como una facruea, como en éste caso, a nombre del partido, únicamente teniendo el Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), ya sea por un error administrativo, un error contable y/o por situaciones que desconoce mi representada.** Por tanto, el hecho de que las facturas hayan sido emitidas a nombre de mi representado, no obliga a reconocer una operación que nuestro instituto político no realizó. (...)*

XXVIII. Acuerdo de Alegatos.

- a) El veintiseis de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la investigación y notificar a las partes involucradas para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran los alegatos que consideraran convenientes. (Foja 2426 del expediente)
- b) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/35434/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio de la etapa de alegatos, para que en un plazo improrrogable de setenta y dos horas manifestara por escrito los alegatos que estimara convenientes. (Fojas 2427-2428 del expediente).
- c) El tres de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio sin número, el Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, formulo los alegatos. (Fojas 2429-2453 del expediente).

XXIX. Cierre de Instrucción. El veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.

XXX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, que fue aprobado en la Vigésima Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización, celebrada el 29 de agosto de dos mil dieciocho por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes, integrantes de dicha

Comisión: las Consejeras Electorales Maestra Adriana Margarita Favela Herrera y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, y los Consejeros Electorales, Doctor Benito Nacif Hernández, y el Consejero Presidente de la Comisión, Doctor Ciro Murayama Rendón.

CONSIDERANDO

1. Competencia. Para establecer la competencia de las autoridades electorales, es necesario tener en cuenta que el diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral. Asimismo, el veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la Ley General de Partidos Políticos.

En dicho Decreto, el legislador federal estableció expresamente en el artículo sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral tendrá 180 días contados a partir de la entrada en vigor de la ley, para expedir los Reglamentos respectivos y que, mientras tanto:

*“Las disposiciones generales emitidas por el Instituto Federal Electoral o por el Instituto Nacional Electoral, con antelación a la entrada en vigor del presente Decreto **seguirán vigentes**, en lo que no se opongan a la Constitución y la presente Ley, hasta en tanto el Consejo General del Instituto Nacional Electoral no emita aquéllas que deban sustituirlas.”*

Así las cosas, con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g); así como tercero y sexto transitorios, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Unidad Técnica de Fiscalización **es competente** para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la

Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General.

En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.

2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que con motivo de la publicación llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General en sesión extraordinaria celebrada el dieciséis de diciembre de dos mil quince, en sesión extraordinaria celebrada el cinco de enero de dos mil dieciocho y sesión ordinaria celebrada el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, Acuerdos INE/CG04/2018¹ e INE/CG614/2017², respectivamente, resulta indispensable determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable.

Al respecto, el artículo TERCERO transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece de manera expresa que:

“Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su inicio. Lo anterior, sin perjuicio de que se apliquen en lo conducente los plazos previstos en los artículos transitorios del presente Decreto.”

En este sentido, por lo que hace a la **normatividad sustantiva** tendrá que estarse a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron las conductas denunciadas por los sujetos obligados, esto es, a lo dispuesto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente al veintitrés de mayo de dos mil catorce, así como al Acuerdo **CG201/2011**, aprobado en sesión extraordinaria celebrada el cuatro de julio de dos mil once, mediante el cual se expidió el Reglamento de Fiscalización y se abrogaron diversos Reglamentos.

¹ Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG409/2017, en cumplimiento a lo ordenado en el SUP-RAP-623/2017.

² Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG264/2014, modificado a su vez con los acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016.

Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis relevante **Tesis XLV/2002**, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “**DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL**” y el principio *tempus regit actum*, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes vigentes en la época de su realización.

Ahora bien, por lo que hace a la **normatividad adjetiva o procesal** conviene señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, precedentes relevantes, identificada con el rubro: “**RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL**”, no existe retroactividad en las normas procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados con éstas, se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan por la norma vigente al momento de su ejecución. Por tanto, en la sustanciación y resolución del procedimiento de mérito, Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobado mediante el Acuerdo **INE/CG614/2017**.

3. Determinación de sanciones. El veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; en ese sentido, la determinación del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización corresponde al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo precedente establece “*A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.*”

En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de Medida y Actualización; por lo que, en la presente Resolución en el supuesto que

se actualice la imposición de una sanción económica en días de salario al sujeto obligado, se aplicará la Unidad de Medida y Actualización.

En sesión pública celebrada el primero de septiembre de dos mil dieciséis, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por unanimidad de votos la tesis que se cita a continuación:

Tesis LXXVII/2016

MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA.- *En los artículos 26 y 41, Base V, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; segundo, tercero y quinto transitorio del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se establece que corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos respecto de los Procesos Electorales Federales y locales; que la nueva Unidad de Medida y Actualización sustituiría la medición en base al salario mínimo, así como la obligación de todas las autoridades nacionales y estatales de adecuar sus disposiciones jurídicas para ese efecto, por lo que todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. En ese sentido, el cálculo y determinación del monto de las multas que se impongan por infracciones a las disposiciones en materia electoral deben realizarse de acuerdo al valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de imponerlas.*

Quinta Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-84/2016.—Actor: Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Guanajuato.— Autoridad responsable: Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.—30 de marzo de 2016.—Unanimidad de votos.— Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Mauricio Elpidio Montes de Oca Durán.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-182/2016 y acumulados.—Promoventes: Partido Revolucionario Institucional y otros.—Autoridad responsable: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas.—22 de junio de 2016.— Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: Jorge Alberto Medellín Pino, Ramiro Ignacio López Muñoz y Juan Guillermo Casillas Guevara.

No obstante lo anterior, al resolver el recurso de apelación con la clave alfanumérica SUP-RAP-759/2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó el criterio con respecto al valor de la Unidad de Medida impuesto como sanción debe ser el vigente al momento de la comisión de la infracción, y no el que tiene esa Unidad de Medida al momento de emitirse la resolución sancionadora, en razón de que, de esa manera se otorga una mayor seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, pues se parte de un valor predeterminado precisamente por la época de comisión del ilícito, y no del que podría variar según la fecha en que se resolviera el procedimiento sancionador correspondiente, en atención a razones de diversa índole, como pudieran ser inflacionarias.

En consecuencia, determinó en la misma resolución, dejar sin efectos jurídicos la tesis relevante del rubro **MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA.**

4. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el sobreseimiento de los procedimientos acumulados que nos ocupan, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada.

En este sentido, la causal referida es inatendible en el caso que nos ocupa, como se demuestra a continuación.

A. Reglas generales. Criterios definidos por la Sala Superior en procedimientos sancionadores distintos a la materia de fiscalización respecto a la extinción de la potestad sancionadora.

Al analizar diversos temas relacionados con procedimientos sancionadores (ordinarios, especiales así como los previstos en normativas de partidos políticos), la Sala Superior ha determinado en reiteradas ocasiones, que en el sistema jurídico nacional se reconocen distintas figuras jurídicas relativas a la **extinción de derechos** que consisten generalmente en facultades, potestades o poderes (como las relativa al inicio del procedimiento sancionador; la determinación de la responsabilidad y la imposición de las sanciones correspondientes a las conductas

infractoras) la cual requiere para su ejercicio válido la realización de los actos encaminados a la creación, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas, referentes normalmente a cuestiones de orden público e interés social, que necesitan de certeza y seguridad jurídica, de modo que cuando no se realizan dichos actos, se agota la potestad y se pierde la posibilidad legal de castigar las infracciones.

La definición y operatividad de la figura jurídica de la caducidad para determinar la extinción de las potestades y atribuciones de las autoridades o de los órganos partidarios para determinar la responsabilidad y, en su caso, las sanciones aplicables a los probables responsables de las conductas infractoras se ha sostenido en diversas ejecutorias, entre las que resulta pertinente destacar **SUPJDC-480/2004, SUP-JDC-488/2004, SUP-JDC-155/2005, SUP-JDC-662/2005, SUP-JDC-942/2007 y SUP-JDC-1107/2007, SUP-JDC-329/2008 y acumulado, SUP-RAP-525/2011 y acumulados, SUP-RAP-614/2017 y acumulados, SUPRAP-737/2017 y acumulados y SUP-RAP-729/2017 y acumulados**, así como en la jurisprudencia 8/2013 de rubro: *CADUCIDAD. OPERA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR*.

Lo que se resalta de las ejecutorias mencionadas es la conclusión de que la **caducidad** de las atribuciones de las autoridades u órganos partidarios investigadores, persecutores y sancionadores de los ilícitos, por el sólo transcurso del tiempo, o de la **prescripción**, como un medio para liberarse de obligaciones, **representan una garantía contra las actuaciones indebidas por parte de los órganos sancionadores**, susceptibles de mantener al individuo en incertidumbre bajo la amenaza del ejercicio de una facultad punitiva y de constituir un obstáculo al pleno ejercicio de los derechos fundamentales.

La Sala Superior también ha sostenido, que la necesidad de dichas instituciones es un imperativo constitucional y, por tanto, cuando la normativa electoral o partidaria **no establece plazo alguno para la extinción de esta potestad**, a fin de erradicar un estado de incertidumbre contrario al orden constitucional, tal vacío normativo **debe cubrirse o subsanarse** a través de los principios básicos del propio ordenamiento jurídico, a través de las diversas técnicas ofrecidas por el derecho, susceptibles de aplicación tratándose de instituciones procesales, tales como la **analogía, la interpretación conforme o acudir a los principios generales del derecho**, en términos de lo previsto en el artículo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque a la luz de los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica, la **posibilidad jurídica de sancionar las**

conductas infractoras debe estar sujeta a un determinado plazo de extinción y, por consecuencia, de las sanciones que puedan imponerse.

Lo anterior, porque en el sistema jurídico nacional se reconoce la figura jurídica de la extinción de las potestades para sancionar las conductas infractoras, justificada generalmente como mecanismo o instrumento relativo a la mutación de las relaciones jurídicas por virtud del transcurso del tiempo, en combinación con la pasividad de los sujetos jurídicos, que puede aplicarse respecto de las personas o de las autoridades, referirse a derechos sustantivos y procesales, e igualmente a facultades, potestades o derechos potestativos.

Como se advierte de las síntesis de criterios de la Sala Superior, la utilización de la figura jurídica extintiva explica y justifica la **pérdida de las facultades sancionadoras de un ente**, porque se trata de un mecanismo aplicado tanto para generar la pérdida de potestades y también para determinar la pérdida de derechos sustantivos o procesales.

Más allá de la denominación que se haya otorgado a la institución jurídica procesal generadora de la extinción, lo relevante es que para la Sala Superior el ejercicio de la facultad para iniciar el procedimiento, o bien para determinar la responsabilidad y sancionar a quienes resulten responsables de las conductas infractoras, no puede ser indefinido ni perene, porque ello atenta contra el principio de legalidad, base de la garantía de los derechos de certeza, seguridad jurídica y de acceso a la jurisdicción de la ciudadanía. Derechos que tienen su sustento en las garantías constitucionales tuteladas en los artículos 14, 16, 17 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La extinción de la potestad sancionadora.

La extinción de la potestad sancionadora en un plazo determinado va alineada con el conocimiento de las personas de la posibilidad materialmente definida de ser sometidos al procedimiento respectivo, a efecto de poder determinar su responsabilidad respecto de los hechos infractores, con la certeza y seguridad jurídica de que podrán verse compelidas a responder por su proceder y soportar las consecuencias legales; pero al mismo tiempo, conocen el límite de que tal facultad no es perpetua, sino que está acotada a un tiempo determinado, pues solo así las personas tendrán certeza y seguridad jurídica, al saber que no podrán ser afectadas o restringidas en sus derechos por el reproche de conductas realizadas con mucha antelación y respecto de las cuales no fueron denunciadas o acusadas o no se realizaron los actos positivos necesarios para sujetarlas oportunamente al

procedimiento respectivo, con lo cual se evita la indefinición de las situaciones jurídicas que pudieran afectar sus intereses legítimos, lo mismo que la arbitrariedad o parcialidad de los entes con potestades sancionadoras y al mismo tiempo se contribuye al eficaz ejercicio de las atribuciones de dichos entes.

La extinción de la potestad sancionadora debe analizarse desde dos vertientes:

- a) La primera, a la luz del plazo requerido para generar la **prescripción de la falta y,**
- b) La segunda, el plazo para **determinar la responsabilidad y, en su caso, sancionar la falta.**

En principio, **ambos plazos deben estar establecidos en una norma;** sin embargo, cuando en la normativa no se recoge expresamente la prescripción de las faltas, ni el plazo para determinar la responsabilidad y, en su caso, para sancionar las faltas, tal omisión en modo alguno implica, que no pueda reconocerse la extinción de la facultad, más bien implica que el órgano con facultades punitivas queda constreñido a reconocer la extinción y determinar, mediante la valoración que realice del tiempo de inactividad entre la falta y el inicio del procedimiento sancionador correspondiente, o bien, entre el inicio del procedimiento y la resolución que le recaiga en la cual se determine la responsabilidad y, en su caso, la sanción de la falta, el plazo requerido para ese efecto sobre la base de parámetros razonables.

La determinación del plazo razonable de la extinción mencionada se justifica con base en la aplicación de los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica que tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De lo contrario, es decir, de no determinar un plazo razonablemente idóneo y suficiente para ese efecto, además de la vulneración de tales principios, trastocaría la garantía constitucional prevista en el artículo 17 de la Ley Fundamental, que reconoce a las personas el derecho a la tutela estatal efectiva, en plazos breves, conforme a referentes que sean **racionales, objetivos y proporcionales** al fin pretendido con su previsión.³

³ Al respecto debe tenerse presente lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia, con relación a que la garantía de acceso a la impartición de justicia prevista en el artículo 17 de la ley fundamental comprende, distintos derechos a favor de los gobernados, uno de ellos, el de justicia pronta consistente en la obligación de los tribunales de resolver las controversias dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Al mismo tiempo, en dicho criterio jurídico se precisó que esta obligación es exigible no sólo a los tribunales, sino

C. Condiciones que interrumpen los plazos de la extinción de la potestad sancionadora.

En el sistema jurídico nacional y, en particular en el sistema electoral, las distintas figuras jurídicas extintivas que se reconocen (como la caducidad, la prescripción, la preclusión, la pérdida de la instancia, etcétera) establecen lapsos distintos y, en algunos casos, se omite la previsión de ellos; sin embargo, la temporalidad o duración para que opere la extinción en cualquiera de las vertientes señaladas responde, entre otras, a las condiciones siguientes:

- Que los titulares de los poderes, potestades o derechos se encuentren en la posibilidad real y material de ejercerlos, sin que existan situaciones ajenas que se lo impidan;
- La necesidad de fomentar, respecto de las autoridades, el ejercicio eficiente de las atribuciones, y en cuanto a los demás entes o sujetos titulares de derechos o facultados para formular denuncias o quejas, el oportuno ejercicio de esos poderes; por último,
- La necesidad de garantizar la seguridad jurídica, así como la certeza de la esfera de derechos de las personas, al impedir que las situaciones que pudieran afectarlas se mantengan latentes de manera indefinida.

Lo anterior se encuentra plenamente aceptado por la Sala Superior en las jurisprudencias 11/2013 y 14/2013, así como en la tesis XII/2017, cuyos rubros y textos dicen:

Jurisprudencia 11/2013

“CADUCIDAD. EXCEPCIÓN AL PLAZO EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. - *De la interpretación sistemática de los artículos 1º, párrafo tercero, 14, 16, 17, 41, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 14, apartado 3, inciso c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8, apartado 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 361, párrafo 2 y 367*

también a cualquier autoridad que realiza actos materialmente jurisdiccionales, es decir, de aquellos entes que en el ámbito de su competencia tienen la atribución para dirimir un conflicto y ejerzan funciones materialmente jurisdiccionales. La jurisprudencia de mérito se identifica como 2ª./J. 192/2007, localizable en la página 209 del Tomo XXVI, octubre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro dice: **“ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.**

a 371 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de la jurisprudencia sustentada de rubro CADUCIDAD. OPERA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, se advierte que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia dentro de un plazo razonable; que el procedimiento especial sancionador es de carácter sumario y que es criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que la potestad sancionadora, por regla general, debe caducar en el plazo de un año, por ser el tiempo razonable y suficiente para tramitarlo y emitir la resolución correspondiente. En ese contexto, el plazo establecido como regla general para la caducidad de la facultad sancionadora en el procedimiento especial, puede, por excepción, ampliarse cuando la autoridad administrativa acredite una causa justificada, razonable y apreciable objetivamente, en la que exponga las circunstancias, de facto o de iure, de las que se advierta que la dilación en la resolución se debe, entre otras, a la conducta procedimental del probable infractor, o bien, a que su desahogo, por su complejidad, requirió de la práctica de diversas diligencias o actos procedimentales, que razonablemente no fue posible realizar dentro de ese plazo; sin que dicha excepción pueda derivar de la inactividad de la autoridad.

Jurisprudencia 14/2013

CADUCIDAD. SUSPENSIÓN DEL PLAZO EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1º, párrafo tercero, 14, 16, 17, 41, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 14, apartado 3, inciso c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8, apartado 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 361, párrafo 2 y 367 a 371 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de la jurisprudencia de rubro CADUCIDAD. OPERA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, se advierte que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia dentro de un plazo razonable; que el procedimiento especial sancionador es de carácter sumario y que la potestad sancionadora, por regla general, debe caducar en el plazo de un año, por ser el tiempo razonable y suficiente para tramitarlo y emitir la resolución correspondiente. En ese contexto, el cómputo del plazo para que opere la caducidad de la facultad sancionadora, debe estimarse suspendido desde el momento en que se interponga algún medio de impugnación contra la resolución que se emita en el procedimiento respectivo, hasta la notificación de la sentencia correspondiente, debido a que dentro de ese lapso la autoridad administrativa no está en posibilidad de ejercer su facultad sancionadora.

Tesis XII/2017

CADUCIDAD. TÉRMINO DE DOS AÑOS Y SUS EXCEPCIONES EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. *De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y del 464 al 469, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que, en aras de tutelar los derechos fundamentales de certeza y seguridad jurídica, en el procedimiento ordinario sancionador, la caducidad de la potestad sancionadora de la autoridad administrativa opera, una vez iniciado el procedimiento, al término de dos años, contados a partir de que la autoridad competente tenga conocimiento de la denuncia respectiva o de los hechos probablemente constitutivos de infracción, lo cual resulta razonable atendiendo a las especificidades del procedimiento y la complejidad en cada una de sus etapas. No obstante, dicho plazo puede ser modificado excepcionalmente cuando: a) la autoridad administrativa electoral exponga y evidencie que las circunstancias particulares de cada caso hacen necesario realizar diligencias o requerimientos que por su complejidad ameritan un retardo en su desahogo, siempre y cuando la dilación no derive de la inactividad de la autoridad; y b) exista un acto intraprocesal derivado de la presentación de un medio de impugnación.*

Como se aprecia, está reconocida la existencia de condiciones citadas como elementos que pueden interrumpir el plazo de para la extinción de la potestad sancionadora, siempre que dichas condiciones se encuentren justificadas de manera razonable y objetiva, para lo cual, impone al órgano con potestades sancionadoras la carga de exponer las circunstancias de hecho o de derecho que justifiquen dicha interrupción.

D. Plazo para determinar el inicio del procedimiento sancionador.

Por regla general, la normativa es la que determina el plazo de prescripción de las faltas administrativas, así como el plazo para que el ente con potestades sancionadoras determine la responsabilidad y, en su caso, la sanción o sanciones correspondientes.

Se distingue la potestad para que el órgano investido de atribuciones para sancionar conductas infractoras inicie, de oficio, el procedimiento, del derecho de las personas a denunciar la comisión de las faltas para que el infractor sea sancionado, si el procedimiento debe seguirse mediante denuncia, queja o petición previa.

Cualquiera de esas formas que se prevea en la normativa, tiene como efecto obligar a los órganos autorizados para iniciar el procedimiento y legitimar a las personas en lo general, a presentar las denuncias e iniciar los procedimientos sancionadores, **a partir de que se ha cometido la falta**, permitiendo a la autoridad desarrollar las actividades necesarias para ejercer su atribución con eficiencia, porque entraña el deber de actuar inmediatamente conforme a sus funciones y el reconocimiento del derecho a denunciar las conductas que se consideren contrarias a la normativa, mismo que podrán deducir al denunciar o formular su queja en contra de quienes considere responsables, a partir de que se realiza la conducta infractora.

Sin embargo, cuando no se tiene conocimiento de la conducta infractora por parte de los órganos con potestades punitivas o de las personas con derecho a denunciar o formular queja en forma coetánea a su comisión, entonces se prevé un tiempo razonable y suficiente para que se inicie de oficio o se formule la queja o denuncia **a partir de la fecha en que se tiene conocimiento de la falta**, de suerte que garantice el ejercicio eficaz de las atribuciones de los órganos con potestades sancionadores para averiguar las faltas y a las personas el derecho de formular la queja **cuando se enteren de la conducta irregular, sin que el plazo pueda extenderse al previsto para la prescripción de la falta**, porque ello atentaría contra los principios de certeza y seguridad jurídica de presuntos responsables.

E. Plazo para determinar la responsabilidad y, en su caso, imponer la sanción.

Este plazo responde a la necesidad de fomentar, respecto de los entes con potestades punitivas, el ejercicio eficiente de las atribuciones, los cuales están compelidos a ejercer sus funciones de manera eficaz, eficiente. Por regla general, este plazo está relacionado con la gravedad de la falta, las especificidades del procedimiento, la complejidad de la sustanciación o, en su caso, la resolución de los medios de impugnación procedentes contra actos procesales, tal como lo ha sostenido la Sala Superior en las jurisprudencias y tesis antes citadas.

F. Regulación de la potestad sancionadora en los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización.

Aunque los precedentes de la Sala Superior son bastos en el análisis de la potestad sancionadora de las autoridades electorales o de los órganos de los partidos políticos con esas atribuciones, no existe precedente en el cual se haya formulado el análisis de la dicha potestad o su extinción en los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, los cuales, se rigen por la normativa específica que los

regula. Por ello, en este apartado se definirá la forma como se encuentra regulada la potestad de esta autoridad en dichos procedimientos.

Es importante indicar, que aun cuando la normativa electoral ha tenido cambios significativos desde la época en que acontecieron los hechos objeto del procedimiento, lo cierto es que procesalmente no han existido cambios significativos en la regulación de los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización.

Además, la sustanciación y resolución de estos procedimientos se regirá con el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de fiscalización, aprobado en sesión extraordinaria de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, mediante Acuerdo INE/CG319/2016, en atención al criterio orientador definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL, porque los actos de autoridad relacionados con dichas normas se agotan en la etapa procesal que los va originando, provocando que se rijan por la norma vigente al momento de su ejecución.

Precisado lo anterior, se debe destacar que los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización que ahora se resuelven iniciaron su sustanciación con el entonces vigente Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, emitido por el Instituto Federal Electoral mediante el Acuerdo identificado con la clave CG199/2011.

En tal norma reglamentaria, en lo que interesa, se reconocían dos tipos procedimientos administrativos en materia de fiscalización seguidos en forma de juicio. Esto es, aquéllos que se inician de manera oficiosa por la autoridad administrativa electoral y aquéllos que se incoaban a instancia de parte, tal distinción resulta relevante dado que, conforme a la naturaleza de cada uno de esos procedimientos, se preveían plazos diferenciados para efecto de que los órganos del entonces Instituto Federal Electoral ejercieran sus respectivas atribuciones en materia de fiscalización de los recursos. Como se razona a continuación:

- **Procedimientos iniciados de oficio**

Es aquel procedimiento administrativo sancionador sobre el financiamiento y gastos de los partidos y agrupaciones que iniciaba de oficio por la Unidad de Fiscalización del entonces IFE, (artículo 2, párrafo 1, numeral IV, incisos a y b).

En este caso, la autoridad administrativa electoral tenía el plazo de 30 días para iniciar válidamente los procedimientos administrativos sancionadores, ese plazo se computaba a partir de que se dictara la resolución de revisión de los informes anuales, de precampaña o de campaña, (artículo 20, párrafos 1 y 2).

En el supuesto que se tratara de procedimientos oficiosos de naturaleza distinta a los antes señalados, y aquellos que derivaran de la revisión de los informes anuales, pero que el Instituto Federal Electoral la autoridad no los hubiera conocido de manera directa, podrían ser iniciados por la Unidad de Fiscalización dentro de los 3 años siguientes a aquél en que se suscitara los hechos presuntamente contrarios a las normas

- **Procedimientos de queja**

Es aquel procedimiento administrativo en materia de fiscalización que la Unidad de Fiscalización iniciaba a petición de parte partir del escrito de denuncia que presente cualquier interesado, por presuntas violaciones a la normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los recursos de los partidos y agrupaciones (artículos 2, párrafo 1, numeral IV, inciso c, así como 20).

En este supuesto, por regla no se preveía expresamente un plazo para efecto de determinar si una queja se había presentado de manera oportuna y, por ende, si la autoridad administrativa electoral estaba en aptitud jurídica de ejercer sus facultades de investigación y, en su caso, dilucidar responsabilidad e imposición de sanción correspondiente.

El único caso en el que se regulaba un plazo para la presentación de la queja, consistía en las denuncias vinculadas con los dictámenes anuales de los informes de gastos, caso en el cual se disponía de 3 años para efecto de presentar la queja respectiva, computados a partir de la publicación de tal resolución en el Diario oficial de la Federación, (artículo 24, párrafo 1, fracción III).

- **Etapas del procedimiento administrativo en materia de fiscalización**

Precisado lo anterior y para efecto de dar claridad al análisis de la materia de los procedimientos que ahora se resuelven, es importante señalar, de manera genérica, cuáles eran las etapas que integraban los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización regulados en el reglamento en consulta.

- i. **Inicio.** El Consejo General o la Unidad de Fiscalización del entonces Instituto Federal Electoral estaba en aptitud jurídica de ordenar el inicio de un procedimiento **cuando tuvieran conocimiento de hechos** que pudieran configurar una violación al abrogado Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos y agrupaciones (artículo 20, párrafo 1).
- ii. **Investigación.** La Unidad de Fiscalización del entonces IFE se allegaría de los elementos de convicción que estimara pertinentes para integrar y sustanciar el expediente del procedimiento respectivo (artículos 13, párrafo 3; 29 y 30).
- iii. **Ampliación del plazo para el Proyecto de Resolución.** La Unidad de Fiscalización podía acordar la ampliación del plazo de sesenta días para presentar los proyectos de resolución cuando la naturaleza de las pruebas ofrecidas o de las investigaciones lo requirieran (artículo 28, párrafo 5).
- iv. **Emplazamiento y contestación.** Cuando se estimara que existían indicios suficientes respecto de la probable comisión de irregularidades, la Unidad de Fiscalización del entonces IFE emplazaría al denunciado, corriéndole traslado con todos los elementos que integraran el expediente respectivo para que contestara por escrito y aportara las pruebas que estimara procedentes (artículo 31, párrafo 1).
- v. **Cierre de instrucción y elaboración del Proyecto de Resolución.** Una vez agotada la instrucción, la Unidad de Fiscalización del entonces IFE emitiría el acuerdo de cierre respectivo y elaboraría el Proyecto de Resolución correspondiente, mismo que se sometería a consideración del Consejo General para su aprobación en la siguiente sesión que celebrara (artículo 32).
- vi. **Resolución.** El Consejo General podía aprobar el proyecto en los términos en que se le presentara; aprobarlo y ordenar que se realizara el engrose en el sentido de las consideraciones de la mayoría; o bien, rechazarlo y ordenar su devolución a la Unidad de Fiscalización del entonces IFE para que elaborara uno nuevo en el sentido de las consideraciones de la mayoría (artículo 33).

- **Plazo para ejercer válidamente la facultad sancionadora**

Ahora bien, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización vigente al momento de determinar la responsabilidad y la sanción correspondiente, es coincidente al establecer el plazo de cinco años para que esta autoridad electoral finque las responsabilidades en materia de fiscalización. Por tanto, tal como se razonó en los apartados anteriores, a fin de observar los principios de legalidad, certeza, seguridad jurídica y acceso efectivo a la impartición de justicia, previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución federal, los aludidos momentos para instaurar el procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, **invariablemente están supeditados a no rebasar el plazo de cinco años previsto a favor de esta autoridad para fincar las responsabilidades respectivas.**

El marco jurídico y legal expuesto con anterioridad sirve de base para sostener, que en el presente asunto no se actualiza ninguna de las vertientes de extinción de la potestad sancionadora de esta autoridad, porque no ha transcurrido el plazo de cinco años previsto en la normativa electoral para que prescriban los hechos de la conducta infractora y para que se determine la responsabilidad y las sanciones aplicables a las infracciones.

Ahora bien, el procedimiento en que se actúa, se ordenó con la finalidad de determinar si el Partido Revolucionario Institucional omitió reportar un egreso en el marco de la revisión al Informe Anual del ejercicio 2012, lo cual implicó para la autoridad sustanciadora la localización de 10 personas físicas, situación que generó un sin número de diligencias a los ciudadanos involucrados, así como a diversas autoridades con la finalidad de lograr la localización de los mismos, y así estar en condiciones idóneas de determinar la comisión de la conducta infractora a la normatividad electoral.

En este tenor, de la cronología de las actuaciones referidas en los antecedentes, se advierte de manera clara el constante e ininterrumpido actuar de la autoridad fiscalizadora para estar en posibilidad de dictar la resolución que en su caso correspondiera.

No obsta a la anterior conclusión, que los hechos generadores de la infracción hayan acontecido en el año dos mil doce, porque conforme a lo previsto en los artículos 361, numeral 2, 372, numeral 4 del derogado Código de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente en esa época, así como los artículos 25, párrafo 1 y 26, fracción V del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización

vigente en ese momento, el plazo de cinco años con que cuenta esta autoridad para fincar las responsabilidades administrativas no ha variado. Por lo que, si esta autoridad tuvo conocimiento de los hechos infractores a partir de la vista dada el veintiséis de septiembre de dos mil trece, y ordenó, respectivamente, el inicio del procedimiento en esa misma fecha, es evidente que se interrumpió el plazo previsto para la prescripción de la falta, toda vez que se realizaron las diligencias con mucha anterioridad al vencimiento de los cinco años.

5. Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, resulta procedente fijar el fondo materia del presente procedimiento, el cual se constriñe a determinar si el Partido Revolucionario Institucional, omitió reportar dentro de su informe anual del ejercicio dos mil doce, el destino de los recursos que erogó por operaciones realizadas con diez proveedores, como se detalla a continuación:

Proveedor	Saldo según Auxiliares Contables del Partido (A)	Saldo reportado por el proveedor (C)	Diferencias determinadas por la Dirección de Auditoría D= (C) - (A)
Especialistas en Medios	1,160,000.00	1,463,920.00	303,920.00
Propaganda Integral Prim	1,015,000.00	1,311,960.00	296,960.00
C-Sercomp de México	692,603.63	717,931.83	25,328.20
Demotecnia División Análisis	435,000.00	1,885,000.00	1,450,000.00
Lava Tap S.A. de C.V.	418,209.00	500,049.10	81,840.10
Transportadora de Protección y Seguridad	2,406,280.61	2,500,197.82	93,917.21
HR MC Hotel Company	229,512.00	277,911.80	48,399.80
El Universal Compañía Periodística Nacional	213,373.77	443,275.10	229,901.33
Sergio Real Field	307,413.91	335,535.25	28,121.34
María Estela Mendoza Batalla	413,747.90	647,325.30 ⁴	233,577.40
Total	7,291,140.82	10,083,106.20	2,791,965.38

Esto es, debe determinarse si el Partido Revolucionario Institucional omitió reportar dentro del Informe anual del ejercicio 2012 la cantidad de \$2,791,965.38 (dos millones setecientos noventa y un mil novecientos sesenta y cinco pesos 38/100 M.N.), derivada de la diferencia entre lo reportado en el informe anual presentado por el partido político y las circularizaciones con proveedores realizadas por la autoridad electoral, incumpliendo con lo dispuesto por el artículos 38, numeral 1,

⁴ Derivado de la revisión realizada a los archivos que obran en el expediente se observó un error derivado de un *lapsus calami* al momento de capturar los montos en el anexo correspondiente a la observación final del dictamen consolidado presentado por la Dirección de Auditoría; siendo el monto correcto \$657,325.30, por lo que la diferencia asciende a la cantidad de \$2,801,965.38.

inciso a), 83, numeral 1, inciso b), fracción II y 342, numeral 1, inciso I) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización mismos que se transcriben a continuación:

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales:

“Artículo 38

1. Son obligaciones de los Partidos Políticos Nacionales:

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;

(...)

Artículo 83

1. Los partidos políticos deberán presentar ante la Unidad los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas:

(...)

b) Informes anuales:

(...)

II. En el informe anual serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe.

(...)

“Artículo 342

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos del presente Código:

(...)

I) El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación de sus recursos o para la entrega de la información sobre el origen, monto y destino de los mismos;

(...)”

Reglamento de Fiscalización

“Artículo 149

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original que expida a nombre del partido, agrupación,

*organizaciones de observadores u organización de ciudadanos, la persona a quien se efectuó el pago. Dicha documentación deberá cumplir con todos los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables, con excepción de lo señalado en los artículos 164, 166 al 168 del Reglamento.
(...)”*

De los artículos señalados, se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes anuales correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral.

Origen del procedimiento

Ahora bien, previo a entrar al estudio de **fondo**, es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento oficioso que por esta vía se resuelve.

Es el caso que durante la revisión de los informes anuales de ingresos y egresos de los Partidos Políticos Nacionales correspondientes al ejercicio dos mil doce; en específico, por lo que hace al Partido Revolucionario Institucional, como parte de los procedimientos de auditoria y verificación se realizaron circularizaciones con los proveedores de servicios del instituto político, de las cuales se advirtieron saldos reportados por 10 proveedores con importes superiores a lo registrado contablemente por el sujeto obligado por \$2,791,965.38 (dos millones setecientos noventa y un mil novecientos sesenta y cinco pesos 38/100 M.N.), mismos que han sido detallados con anterioridad.

En virtud de lo anterior, se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de determinar si el partido político se apegó a la normatividad aplicable, respecto del origen y destino de los recursos

Inicio de la investigación.

Consecuentemente, el ocho de octubre de dos mil trece, la Unidad de Fiscalización acordó integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de expediente, notificar al Secretario del Consejo su inicio, así como publicar el acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en los estrados del Instituto.

Derivado de lo anterior, con el fin de allegarse de elementos que ayudaran a esclarecer los hechos materia del presente procedimiento, se procedió a realizar una serie de diligencias, encaminando inicialmente la línea de investigación a la Dirección de Auditoria a efecto de solicitarle la documentación obtenida en el marco de la revisión del Informe aludido, correspondiente a las operaciones materia de análisis.

Al respecto, la Dirección en comento dio respuesta⁵ a lo solicitado remitiendo lo siguiente:

- 10 Acuses de notificación a los proveedores y/o prestadores de servicios.
- 10 Escritos de respuesta de los proveedores involucrados.
- 172 Comprobantes de servicios a nombre del partido.
- 5 Contratos de prestación de servicios.

⁵ La información y documentación remitida por la Dirección de Auditoría, constituyen documentales públicos en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.

Por otra parte, se dirigió la línea de investigación a requerir al instituto partido para que informara respecto de la totalidad de las operaciones llevadas a cabo con los proveedores involucrados durante el año dos mil doce, detallando el monto y forma de pago y remitiera la documentación comprobatoria relacionada con las mismas.

Al respecto, el sujeto obligado dio respuesta⁶ a lo solicitado remitiendo lo siguiente respecto a los proveedores requeridos:

Ref.	Proveedor	Documentación
1	Especialistas en Medios, S.A. de C.V.	Copia de siete facturas y siete cheques utilizados para el pago de las mismas, los cuales suman el monto de \$1,463,920.00 (Un millón cuatrocientos sesenta y tres mil novecientos veinte pesos 00/100 M.N.).
2	Propaganda Integral Prim, S.A. de C.V.	Copia de siete facturas y siete cheques utilizados para el pago de las mismas, los cuales suman el monto de \$1,363,000.00 (Un millón trescientos sesenta y tres mil pesos 00/100 M.N.).
3	C-SERCOMP de México, S.A. de C.V.	Copia de la factura 1194 y del cheque por un monto de \$25,373.20 (veinticinco mil trescientos setenta y tres 20/100) que ampara el pago en el ejercicio 2013 de la misma
4	Demotecnia, División y Análisis, S.A. de C.V.	Copia de la factura 14 y del cheque correspondiente al pago de la misma por el monto de \$435,000.00 (cuatrocientos treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.).
5	Lavatap, S.A. de C.V.	Copia de doce facturas, doce cheques utilizados para el pago de las mismas, los cuales suman el monto de \$500,049.90 (quinientos mil cuarenta y nueve pesos 90/100 M.N.) y de un estado de cuenta.
6	Protección y Seguridad, S.A. de C.V.	Transferencia bancaria donde se refleja la operación efectuada por el Comité Ejecutivo Nacional con el proveedor en mención por el monto de \$2,352,463.47 (dos millones trescientos cincuenta y dos mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 47/100 M.N.).
7	HR MC Hotel Company S. de R.L. de C.V.	Copia de dos transferencias electrónicas y copia de dos facturas por el monto total de \$229,512.00 (doscientos veintinueve mil quinientos doce pesos 00/100 M.N.).
8	El Universal Compañía Periodística Nacional, S.A. de C.V.	Copia de quince facturas y cheques mediante los cuales fueron pagadas por el monto total de \$293,131.72 (doscientos noventa y tres mil ciento treinta y un pesos 72/100 M.N.).
9	Sergio Rea Field	Copia de treinta y cinco recibos de honorarios y treinta y cinco cheques mediante los cuales fueron pagados por el monto total de \$324,667.25 (trescientos veinticuatro mil seiscientos sesenta y siete pesos 72/100 M.N.).

⁶ La información remitida por el Partido Revolucionario Institucional, en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización constituyen una documental privada, a las cuales se les otorga un valor indiciario simple y solamente generan pleno valor probatorio si se encuentran apoyadas con otros elementos que confirmen tanto su autenticidad, como aquellas circunstancias con las que se pretenden relacionar los hechos materia de investigación.

Ahora bien, a fin de verificar las operaciones e identificar el origen de las diferencias detectadas durante la revisión del informe en comento, esta autoridad dirigió la línea de investigación a los proveedores con los que se realizaron las mismas, como se señala a continuación:

Proveedor	Requerimiento	Respuesta y/o documentación remitida ⁷
C-Secomp de México, S.A. de C.V.	Confirmara las operaciones realizadas con el partido, remitiera la documentación correspondiente y precisara monto y forma de pago.	<ul style="list-style-type: none"> • Concentrado de montos facturados desglosando importe, número de factura, fecha de elaboración y fecha de pago, así como descripción del servicio. • Copia de 13 facturas emitidas a favor del partido. • Copia de 13 estados de cuenta bancarios en los que se reflejan los pagos recibidos.
Propaganda Integral Prim, S.A. de C.V.	Confirmara las operaciones realizadas con el partido, remitiera la documentación comprobatoria correspondiente, precisara monto y forma de pago.	<ul style="list-style-type: none"> • Copia de dos contratos de prestación de servicios. • Copia de 7 facturas emitidas a favor del partido y de 7 cheques mediante los cuales se pagaron los servicios prestados.
Especialistas en Medios S.A. de C.V.	Confirmara las operaciones realizadas con el partido, remitiera en la documentación comprobatoria correspondiente y precisara monto y forma de pago.	<ul style="list-style-type: none"> • Auxiliar contable donde se observa el registro de las operaciones efectuadas con el partido, los montos facturados, número de transferencia de pago, fecha de cobro y número de las facturas. • Copia de 2 contratos de prestación de servicios, 15 facturas emitidas a favor del partido, 8 recibos de pagos realizados mediante cheque, así como de los estados de cuenta donde se reflejan los pagos. • Muestras de los servicios proporcionados.

⁷ Debe precisarse que la información y documentación remitida por los proveedores en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, constituyen documentales privadas, las cuales se les otorga un valor indiciario simple y solamente generan pleno valor probatorio si se encuentran apoyadas con otros elementos que confirmen tanto su autenticidad, como aquellas circunstancias con las que se pretenden relacionar los hechos materia de investigación.

CONSEJO GENERAL
P-UFRPP 56/13

Proveedor	Requerimiento	Respuesta y/o documentación remitida⁷
Transportadora de Protección y Seguridad, S.A. de C.V.	Confirmara las operaciones realizadas con el partido, remitiera en la documentación comprobatoria correspondiente y precisara monto y forma de pago.	<ul style="list-style-type: none"> • Copia de contratos por la venta de una camioneta con blindaje, de prestación de servicios y venta de refacciones. • Copia de 10 facturas suscritas a nombre del Partido Revolucionario Institucional. • Copia de cheques, depósitos en efectivo y estados de cuenta donde se reflejan los pagos de los servicios realizados.
Demotecnia División Análisis, S.C.	Confirmara las operaciones realizadas con el partido, remitiera en la documentación comprobatoria correspondiente y precisara monto y forma de pago.	<ul style="list-style-type: none"> • Copia de once facturas emitidas por servicios realizados al Partido Revolucionario Institucional. • Copia de estados de cuenta bancarios en los que se observan los pagos realizados correspondientes a las facturas referidas.
El Universal Compañía Periodística Nacional, S.A. de C.V.	Confirmara las operaciones realizadas con el partido, remitiera en la documentación comprobatoria correspondiente y precisara monto y forma de pago.	<ul style="list-style-type: none"> • Copia de veintidós facturas emitidas a nombre del Partido Revolucionario Institucional. • Copia de los cheques o de las transferencias de pago mediante los que se pagaron los servicios • Testigo de los servicios prestados.
Sergio Real Field	Confirmara las operaciones realizadas con el partido, remitiera en la documentación comprobatoria correspondiente y precisara monto y forma de pago.	<ul style="list-style-type: none"> • Copia de treinta y seis recibos de honorarios emitidos a nombre del Partido Revolucionario Institucional. • Copia de los cheques o fichas de depósito mediante los cuales fueron pagados los servicios prestados o en su caso los estados de cuenta en los cuales se reflejan los pagos realizados.
HR MC Hotel Company, S. de R.L. de C.V.	Confirmara las operaciones realizadas con el partido, remitiera en la documentación comprobatoria correspondiente y precisara monto y forma de pago.	<ul style="list-style-type: none"> • Al respecto, en su respuesta, el proveedor hizo del conocimiento de esta autoridad que mediante escrito notificado el 04 de julio de dos mil trece en las oficinas de la entonces Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, en respuesta al oficio UF-DA/5590/13 remitió la documentación solicitada en el escrito referido en el párrafo anterior.

Proveedor	Requerimiento	Respuesta y/o documentación remitida ⁷
Lava Tap, S.A. de C.V.	Confirmara las operaciones realizadas con el partido, remitiera en la documentación comprobatoria correspondiente y precisara monto y forma de pago.	<ul style="list-style-type: none"> • Copia del contrato de prestación de servicios suscrito con el Partido Revolucionario Institucional. • Copia de la ficha de depósito mediante el cual se realizó el pago en una sola exhibición, copia del estado de cuenta bancario donde se refleja el mismo, así como copia de la factura.
María Estela Mendoza Batalla.	Confirmara las operaciones realizadas con el partido, remitiera en la documentación comprobatoria correspondiente y precisara monto y forma de pago.	<ul style="list-style-type: none"> • Copia de cincuenta facturas suscritas a nombre del Partido Revolucionario Institucional.

Asimismo, procedió a emplazar al instituto político, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, corriéndole traslado con todas las constancias que integran el expediente⁸.

En respuesta a lo anterior, el tres de julio de dos mil dieciocho, el C. Emilio Suarez Licona, en su carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo General de este Instituto, atendió el emplazamiento señalando medularmente lo siguiente:

- Que el partido Revolucionario Institucional en todo momento se ha pronunciado en el sentido de negar las operaciones supuestamente realizadas con el proveedor “HR MC Hotel Company, S. de R.L. de C.V.”, consistentes en la realización de 3 eventos por la cantidad de \$143,808.73 por lo que no se encuentra en el supuesto de la omisión del reporte de los egresos.
- Precisa que si bien una factura es un documento que podría permitir la acreditación de una relación comercial, lo cierto es que su misma naturaliza no tiene el alcance para confirmar una relación jurídica, maxime cuando una de las partes niega la misma.

Aunado a lo anterior, en el periodo de alegatos el representante del partido señaló que en repetidas ocasiones su representado se pronunció en sentido de negar la solicitud y recepción/prestación del servicio por la realización de eventos con el

⁸ Exceptuando aquellas que contienen datos personales, mismas que acorde a lo que disponen los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 15 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública tienen el carácter de información confidencial, en cumplimiento a lo que establece el artículo 24, fracción VI del mismo ordenamiento.

proeedor “HR MC Hotel Company, S. de R.L. de C.V.” por el monto de \$143,808.73 por lo que no se encuentra en el supuesto de haber omitido realizar el reporte de dicho egreso; lo anterior considerando que cualquier persona puede emitir una orden de servicio, a nombre del partido.

Así pues, dichos escritos y documentación agregada, constituyen una documental privada que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo hará prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obran en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

Como resultado de todo lo anterior, y de las demás diligencias realizadas por esta autoridad se agregaron al expediente todas las constancias, información y documentación obtenida por la autoridad, del instituto político, proveedores, autoridades y personas físicas que fueron requeridas durante la sustanciación del expediente, mismas que implican múltiple material probatorio que llena a este órgano resolutor a la construcción de diversas conclusiones.

Visto lo anterior, a fin de verificar si se acreditan los extremos de los supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, deberán analizarse y valorarse en su conjunto, cada uno de los elementos de prueba que obran dentro del expediente de mérito, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral federal.

Es preciso señalar que derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en que se actúa y supuestos de conductas que se presentan, a efecto de mayor claridad, resulta conveniente dividir en apartados el estudio de fondo del procedimiento de mérito. Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que con el objeto de sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de la autoridad electoral.

En este orden de ideas, en atención a los hechos objeto del presente procedimiento oficioso, el orden será el siguiente:

A. Operaciones reportadas.

B. Operaciones no reportadas.

Una vez precisado lo anterior, y a fin de conocer los razonamientos realizados por la autoridad respecto de la conducta realizada por el Partido Revolucionario Institucional, se procede a efectuar el estudio y análisis de cada uno de los apartados aludidos.

A. Operaciones reportadas.

En el presente apartado se analizará el destino de los recursos respecto de 174 facturas relacionadas con 10 proveedores; a fin de estar en aptitud de determinar el origen de las diferencias detectadas por la autoridad durante la revisión del informe anual aludido.

En ese sentido, una vez analizada la documentación remitida por la Dirección de Auditoría, relativa a los registros contables y comprobación presentada por el partido en el marco de la revisión de su Informe Anual correspondiente al ejercicio dos mil doce, se dirigió la línea de investigación a confirmar con el partido y los proveedores anteriormente señalados, tal y como se detalla a continuación:

- Especialistas en Medios, S.A. de C.V.

Documentación remitida por la Dirección de Auditoría			Documentación presentada por el partido en respuesta a los requerimientos formulados			Documentación remitida por los proveedores y prestadores de servicio en respuesta a los requerimientos		
Factura	Importe	Póliza de cheque	Monto	Factura	Cheque	Importe	Factura	Forma de Pago
1881	\$178,640.00		\$174,640.00	1881	0014314	\$178,640.00	1881	DEPÓSITO BANAMEX A CTA ***6465 POR \$174,640.00 DEL 12 DE ENERO DE 2012, EL CUAL REFIERE CHEQUE 14314
		NO	\$4,000.00		0015874			
2094	\$178,640.00	NO	\$178,640.00	2094		\$178,640.00	2094	DEPÓSITO BANAMEX A CTA ***6465 POR \$357,280.00 DEL 01 DE FEBRERO DE 2012, REFERENTE AL CHEQUE 14433
2117	\$178,640.00	NO	\$178,640.00	2117	0014433	\$178,640.00	2117	
3956	\$232,000.00	NO	\$232,000.00	3956	0016113	\$232,000.00	3956	DEPÓSITO BANAMEX A CTA ***6465 POR \$232,000.00 DEL 16 DE OCT DE 2012
4168	\$232,000.00	NO	\$232,000.00	4168	0016380	\$232,000.00	4168	DEPÓSITO BANAMEX A CTA ***6465 POR \$232,000.00 DEL 20 DE NOV DE 2012
4295	\$232,000.00	NO	\$232,000.00	4295	0016384	\$232,000.00	4295	DEPÓSITO BANAMEX A CTA ***6465 POR \$232,000.00 DEL 20 DE NOV DE 2012
4416	\$232,000.00	NO	\$232,000.00	4416	0016451	\$232,000.00	4416	DEPÓSITO BANAMEX A CTA ***6465 POR \$232,000.00 DEL 10 DE DIC DE 2012
4417	\$232,000.00	AUX CONTABLE Y BALANZA	\$232,000.00	4417	15730	\$232,000.00	4417	DEPÓSITO BANAMEX A CTA ***6465 POR \$232,000.00 DEL 11 DE FEB DE 2013 EMITIDO EL 9 DE NOV 2012, EL CUAL REFIERE CHEQUE 16830

**CONSEJO GENERAL
P-UFRPP 56/13**

▪ **Propaganda Integral Prim, S.A. de C.V**

Documentación remitida por la Dirección de Auditoría			Documentación presentada por el partido en respuesta a los requerimientos formulados			Documentación remitida por los proveedores y prestadores de servicio en respuesta a los requerimientos			
Factura	Importe	Póliza de cheque	Monto	Factura	Cheque	Monto	Factura	Cheque	Forma de Pago
A9	\$34,800.00	NO	NO	NO	NO	\$34,800.00	A9	127	CHEQUE HSBC 127 DE 30 DE MAYO CTA *****1091
A13	\$262,160.00	NO	NO	NO	NO	\$262,160.00	A13	150	CHEQUE HSBC 150 DE 6 DE JUNIO CTA *****1091
A27	\$203,000.00	NO	\$203,000.00	A27	0016110	\$203,000.00	A27	16110	CHEQUE BANCOMER 16110 DE 10 DE OCT CTA *****3051
A31	\$203,000.00	NO	\$203,000.00	A31	0016381	\$203,000.00	A31	16381	CHEQUE BANCOMER 16381 DE 15 DE NOV CTA *****3051
A33	\$203,000.00	NO	\$203,000.00	A33	0016385	\$203,000.00	A33	16385	CHEQUE BANCOMER 16385 DE 15 DE NOV CTA *****3051
A35	\$203,000.00	NO	\$203,000.00	A35	0016453	\$203,000.00	A35	16453	CHEQUE BANCOMER 16453 DE 27 DE NOV CTA *****3051
A37	\$203,000.00	NO	\$203,000.00	NO	0016831	\$203,000.00	A37	16831	CHEQUE 16831

▪ **C–Sercomp de México S.A. de C.V.**

Documentación remitida por la Dirección de Auditoría			Documentación presentada por el partido en respuesta a los requerimientos formulados			Documentación remitida por los proveedores y prestadores de servicio en respuesta a los requerimientos		
Factura	Importe	Póliza de cheque	Monto	Factura	Cheque	Monto	Factura	Forma de Pago
1105	\$19,558.72	NO	\$19,558.72	1105	0014485	\$19,558.72	1105	CHEQUE BANCOMER 7 DE MARZO CTA *****9909
1106	\$60,161.71	NO	\$60,161.71	1106	0014345	\$60,161.71	1106	CHEQUE BANCOMER 1 DE FEBRERO CTA *****9909
1321	\$35,192.22	NO	\$35,192.22	1321	0014612	\$35,192.22	1321	CHEQUE BANCOMER 7 DE MARZO CTA *****9909
1486	\$45,625.11	NO	\$45,625.11	1486	0014820	\$45,625.11	1486	CHEQUE BANCOMER 12 DE ABRIL CTA *****9909
1630	\$40,439.92	NO	\$40,439.92	1630	0015071	\$40,439.92	1630	CHEQUE BANCOMER 3 DE MAYO CTA *****9909
1840	\$55,197.89	NO	\$55,197.89	1840	0015328	\$55,197.89	1840	CHEQUE BANCOMER 8 DE JUNIO CTA *****9909
1993	\$108,777.96	NO	\$108,777.96	1993	0015468	\$108,777.96	1993	CHEQUE BANCOMER 25 DE JUNIO CTA *****9909
147	\$96,771.03	NO	\$96,771.03	147	0015762	\$96,771.03	147	CHEQUE BANCOMER 15 DE AGO CTA *****9909
367	\$55,471.55	NO	\$55,471.55	367	0015830	\$55,471.55	367	CHEQUE BANCOMER 6 DE SEPT CTA *****9909
468	\$38,540.32	NO	\$38,540.32	468	0015982	\$38,540.32	468	CHEQUE BANCOMER 1 DE OCT CTA *****9909
721	\$54,483.73	NO	\$54,483.73	721	0016206	\$54,483.73	721	CHEQUE BANCOMER 1 DE NOV CTA *****9909
927	\$82,383.47	NO	\$82,383.47	927	0016473	\$82,383.47	927	CHEQUE BANCOMER 3 DE DIC CTA *****9909
1050	\$25,373.20	NO	\$25,373.20	1050	0016644	\$25,373.20	1050	CHEQUE BANCOMER 1 DE FEBRERO CTA *****9909

▪ **Demotecnia División de Análisis, S.C.**

Documentación remitida por la Dirección de Auditoría			Documentación presentada por el partido en respuesta a los requerimientos formulados			Documentación remitida por los proveedores y prestadores de servicio en respuesta a los requerimientos		
Factura	Importe	Póliza de cheque	Monto	Factura	Cheque	Monto	Factura	Forma de pago
17	\$435,000.00	NO	\$435,000.00	17	0014336	\$435,000.00	17	DEPÓSITO A CTA *****7322 BANAMEX DEL 24 DE ENERO 2012
18	\$145,000.00	NO	NO	NO	NO	\$145,000.00	18	DEPÓSITO A CTA *****7322 BANAMEX DEL 31 DE ENERO 2012

**CONSEJO GENERAL
P-UFRPP 56/13**

Documentación remitida por la Dirección de Auditoría			Documentación presentada por el partido en respuesta a los requerimientos formulados			Documentación remitida por los proveedores y prestadores de servicio en respuesta a los requerimientos		
Factura	Importe	Póliza de cheque	Monto	Factura	Cheque	Monto	Factura	Forma de pago
21	\$145,000.00	NO	NO	NO	NO	\$145,000.00	21	DEPOSITOS A LA CTA *****7322 DE BANAMEX POR \$18,000.00 Y (3) POR \$17,400.00 EL 16; POR \$11,600.00 EL 17; POR \$17,400.00 EL 18; POR \$11,000.00 Y (2) POR \$11,600.00 EL 20, Y POR \$11,600.00 EL 25, TODOS DE ENERO DE 2012, SUMA \$145,000.00
22	\$145,000.00	NO	\$145,000.00	22	1999	\$145,000.00	22	DEPOSITO A CTA *****7322 BANAMEX DEL 17 DE FEBRERO 2012
23	\$145,000.00	NO	\$145,000.00	23	2000	\$145,000.00	23	DEPOSITO A CTA *****7322 BANAMEX DEL 17 DE FEBRERO 2012
26	\$145,000.00	NO	\$145,000.00	26	1025	\$145,000.00	26	DEPOSITOS A LA CTA *****7322 DE BANAMEX POR \$40,600.00, \$50,750.00, POR \$40,599.99 Y POR \$50,750.00 TODOS EL 25 DE ENERO DE 2012, SUMA \$182,699.99
27	\$145,000.00	NO	\$145,000.00	27	1026	\$145,000.00	27	DEPOSITOS A LA CTA *****7322 DE BANAMEX POR \$50,750.00 Y POR \$40,600.00 EL 26, Y POR \$24,350.00 EL 27, TODOS DE ENERO DE 2012, SUMA \$115,700.00
28	\$145,000.00	NO	\$145,000.00	28	1032	\$145,000.00	28	DEPOSITOS A LA CTA *****7322 DE BANAMEX POR \$24,400.00 Y (2) POR \$24,360.00 EL 30 DE ENERO; POR \$16,917.00 Y (2) POR \$27,066.01 EL 10 DE FEBRERO, AMBOS DE 2012, SUMA \$144,169.02
29	\$145,000.00	NO	\$145,000.00	29	1033	\$145,000.00	29	DEPOSITOS A LA CTA *****7322 DE BANAMEX POR \$17,400.00 Y POR \$16,917.00 EL 13 DE FEBRERO; POR \$16,917.00 EL 14 DE FEBRERO; POR \$20,000.00, POR \$29,000.00, POR \$17,400.00 Y POR \$17,500.00 EL 2 DE MARZO, TODOS DE 2012, SUMA \$144,800.01
30	\$145,000.00	NO	\$145,000.00	30	2260	\$145,000.00	30	DEPOSITOS A LA CTA *****7322 DE BANAMEX POR \$17,400.00 Y POR \$29,000.00 EL 2; POR \$18,000.00 Y (3) POR \$24,360.00 EL 5, AMBOS DE MARZO DE 2012, SUMANDO \$137,480.00
31	\$145,000.00	NO	\$145,000.00	31	1034	\$145,000.00	31	DEPOSITOS A LA CTA *****7322 DE BANAMEX POR \$11,600.00 EL 5, POR \$11,000.00, POR \$27,500.00, POR \$30,450.00 Y POR \$24,360.00 EL 6; Y POR \$40,600.00 EL 7, TODOS DE MARZO DE 2012, SUMA \$145,510.00

▪ **Lava Tap, S.A. de C.V.**

Documentación remitida por la Dirección de Auditoría			Documentación presentada por el partido en respuesta a los requerimientos formulados			Documentación remitida por los proveedores y prestadores de servicio en respuesta a los requerimientos			
Factura	Importe	Póliza de cheque	Monto	Factura	Cheque	Monto	Factura	Cheque	Forma de Pago
7690	\$40,020.00	NO	\$40,020.00	7690	446	\$40,020.00	7690	DEPOSITO 446	DEPÓSITO A LA CTA *****7848 DE SCOTIABANCK POR \$46,500.22 DE 23 DE MARZO DE 2012, DETALLE DE DIVISIÓN \$6,480.22 Y \$40,020.00
8973	\$40,020.00	NO	\$40,020.00	8973	414	\$40,020.00	8973	DEPOSITO 414	DEPÓSITO A LA CTA *****7848 DE SCOTIABANCK POR \$72,991.74 DE 22 DE FEBRERO DE 2012, DETALLE DE DIVISIÓN \$15,534.40, \$40,020.00 Y \$17,437.34
8728	\$43,621.80	NO	\$43,621.80	8728	472	\$43,621.80	8728	DEPOSITO 472	DEPÓSITO A LA CTA *****7848 DE SCOTIABANCK POR \$65,851.13 DE 30 DE ABRIL DE 2012, DETALLE DE DIVISIÓN \$14,904.00, \$7,325.33 Y \$43,621.80
9705	\$41,820.90	NO	\$41,820.90	9705	0015227	\$41,820.90	9705	DEPOSITO 15227	DEPÓSITO A LA CTA *****7848 DE SCOTIABANCK POR \$70,460.46 DE 6 DE JUNIO DE 2012, DETALLE DE DIVISIÓN \$6,203.68, \$7,531.88, \$14,904.00 Y \$41,820.90
10483	\$41,820.90	NO	\$41,820.90	10483	0015756	\$41,820.90	10483	DEPOSITO 15756	DEPÓSITO A LA CTA *****7848 DE SCOTIABANCK POR \$167,283.60 DE 20 DE AGO DE 2012
11317	\$41,820.90	NO	\$41,820.90	11317		\$41,820.90	11317		
12130	\$41,820.90	NO	\$41,820.90	12130		\$41,820.90	12130		
13097	\$41,820.90	NO	\$41,820.90	13097		\$41,820.90	13097		

**CONSEJO GENERAL
P-UFRPP 56/13**

Documentación remitida por la Dirección de Auditoría			Documentación presentada por el partido en respuesta a los requerimientos formulados			Documentación remitida por los proveedores y prestadores de servicio en respuesta a los requerimientos			
Factura	Importe	Póliza de cheque	Monto	Factura	Cheque	Monto	Factura	Cheque	Forma de Pago
13979	\$41,820.90	NO	\$41,820.90	13979	0015869	\$41,820.90	13979	DEPOSITO 15869	DEPÓSITO A LA CTA *****7848 DE SCOTIABANCK POR \$65,631.10 DE 20 DE SEPT DE 2012, DETALLE DE DIVISIÓN \$7,837.00, \$15,973.20 Y \$41,820.90
14801	\$41,820.90	NO	\$41,820.90	14801	0016038	\$41,820.90	14801	DEPOSITO 16038	DEPÓSITO A LA CTA *****7848 DE SCOTIABANCK POR \$461,989.05 DE 18 DE OCT DE 2012, DETALLE DE DIVISIÓN \$280,112.16, \$140,055.99 Y \$41,820.90
15605	\$41,820.90	NO	\$41,820.90	15605	0016243	\$41,820.90	15605	DEPOSITO 16243	DEPÓSITO A LA CTA *****7848 DE SCOTIABANCK POR \$110,932.32 DE 16 DE NOV DE 2012 DETALLE DE DIVISIÓN \$20,413.45, \$7,267.40, \$41,430.57 Y \$41,820.90
16269	\$41,820.90	NO	\$41,820.90	16269	0016651	\$41,820.90	16269	DEPOSITO 16651	DEPÓSITO A LA CTA *****7848 DE SCOTIABANCK POR \$99,437.98 DE 30 DE ENERO DE 2013, DETALLE DE DIVISIÓN \$9,108.48, \$11,228.60, \$37,280.00 Y \$41,820.90

- Transportadora de Protección y Seguridad, S.A. de C.V.

Documentación remitida por la Dirección de Auditoría			Documentación presentada por el partido en respuesta a los requerimientos formulados			Documentación remitida por los proveedores y prestadores de servicio en respuesta a los requerimientos		
Factura	Importe	Póliza de cheque	Monto	Factura	Cheque	Monto	Factura	Forma de Pago
P3465	\$9,958.60	NO	NO	NO	NO	\$9,958.60	P3465	DEPÓSITO EN EFECTIVO A LA CTA 65-50184786-0 EL 15 DE FEBRERO DE 2012 EN SANTANDER
F1587	\$1,675,563.57	NO	\$2,352,463.57	NO	NO	\$1,675,563.57	F1587	TRANSFERENCIA A CTA 0447785356 EL 04 DE JULIO DE 2012 EN BANCOMER POR \$2,352,463.57
F1588	\$676,900.00	NO		NO	NO	\$676,900.00	F1588	
P5072	\$34,718.22	NO	NO	NO	NO	\$34,718.22	P5072	DEPÓSITO EN EFECTIVO A LA CTA 65-50184786-0 EL 25 DE JUNIO DE 2012 EN SANTANDER
M2823	\$5,959.63	NO	NO	NO	NO	\$5,959.63	M2823	DEPÓSITO EN EFECTIVO A LA CTA 65-50184786-0 EL 21 DE AGO DE 2012 EN SANTANDER
M3210	\$15,428.00	NO	NO	NO	NO	\$15,428.00	M3210	DEPÓSITO EN EFECTIVO A LA CTA 65-50184786-0 EL 03 DE OCT DE 2012 EN SANTANDER
M3237	\$53,817.04	NO	\$53,817.04	NO	NO	\$53,817.04	M3237	TRANSFERENCIA A LA CTA 65-50320913-6 EL 03 DE OCT DE 2012 EN SANTANDER
M3297	\$5,946.16	NO	NO	NO	NO	\$5,946.16	M3297	DEPÓSITO EN EFECTIVO A LA CTA 65-50184786-0 EL 14 DE NOV DE 2012 EN SANTANDER POR \$11,892.32
M3298	\$5,946.16	NO	NO	NO	NO	\$5,946.16	M3298	
M3598	\$15,960.44	NO	NO	NO	NO	\$15,960.44	M3598	DEPÓSITO EN EFECTIVO A LA CTA 65-50184786-0 EL 28 DE ENERO DE 2013 EN SANTANDER

- El Universal Compañía Periodística Nacional, S.A. de C.V.

Documentación remitida por la Dirección de Auditoría			Documentación presentada por el partido en respuesta a los requerimientos formulados			Documentación remitida por los proveedores y prestadores de servicio en respuesta a los requerimientos			
Factura	Importe	Póliza de cheque	Monto	Factura	Cheque	Monto	Factura	Cheque	Forma de Pago
45380	\$23,085.97	NO	NO	NO	NO	\$23,085.97	45380		PAGO EN EFECTIVO DE 20 DE ENERO DE 2012
46938	\$21,986.64	NO	\$21,986.64	46938	419	\$21,986.64	46938	419	DEPÓSITO A LA CTA BBVA BANCOMER 419 DE 7 DE MARZO DE 2012
50933	\$23,865.84	NO	\$23,865.84	50933	0015104	\$23,865.84	50933	15104	DEPÓSITO A LA CTA BBVA BANCOMER 15104 DE 18 DE MAYO DE 2012
54566	\$23,085.98	NO	\$23,085.98	54566		\$23,085.98	54566		DEPÓSITO A LA CTA BBVA BANCOMER 15104 DE 18 DE MAYO DE 2012

**CONSEJO GENERAL
P-UFRPP 56/13**

Documentación remitida por la Dirección de Auditoría			Documentación presentada por el partido en respuesta a los requerimientos formulados			Documentación remitida por los proveedores y prestadores de servicio en respuesta a los requerimientos			
Factura	Importe	Póliza de cheque	Monto	Factura	Cheque	Monto	Factura	Cheque	Forma de Pago
50936	\$11,542.99	NO	NO	NO	NO	\$11,542.99	50936		PAGO EN EFECTIVO DE 15 DE JUNIO DE 2012
59297	\$11,557.08	NO	\$11,557.08	59297	0015289	\$11,557.08	59297	15289	DEPÓSITO A LA CTA BBVA BANCOMER 15289 DE 14 DE JUNIO DE 2012
62748	\$23,114.16	NO	NO	NO	NO	\$23,114.16	62748		DEPÓSITO A LA CTA BANAMEX DE 24 DE JULIO DE 2012
62749	\$23,114.16	NO	\$23,114.16	62749	0015476	\$23,114.16	62749	15476	DEPÓSITO A LA CTA BBVA BANCOMER 5476 DE 4 DE JULIO DE 2012
62754	\$11,542.99	NO	\$11,542.99	62754	574	\$11,542.99	62754	1722	DEPÓSITO A LA CTA BBVA BANCOMER 1722 DE 26 DE JULIO DE 2012
64737	\$23,114.16	NO	\$23,114.16	64737	0015750	\$23,114.16	64737	15750	DEPÓSITO A LA CTA BBVA BANCOMER 15750 DE 17 DE AGO DE 2012
69060	\$23,085.97	NO	NO	NO	NO	\$23,085.97	69060		PAGO EN EFECTIVO DE 5 DE NOV DE 2012
70681	\$11,557.08	NO	\$11,557.08	70681	0015873	\$11,557.08	70681	15873	DEPÓSITO A LA CTA BBVA BANCOMER 15873 DE 11 DE SEPT DE 2012 POR LA CANTIDAD DE \$27,736.99
70870	\$16,179.91	NO	\$16,179.91	70870		\$16,179.91	70870		
72119	\$23,085.97	NO	NO	NO	NO	\$23,085.97	72119		PAGO EN EFECTIVO DE 5 DE NOV DE 2012
72256	\$23,114.16	NO	NO	NO	NO	\$23,114.16	72256		PAGO EN EFECTIVO DE 5 DE NOV DE 2012
72257	\$23,114.16	NO	NO	NO	NO	\$23,114.16	72257		PAGO EN EFECTIVO DE 5 DE NOV DE 2012
72340	\$23,114.16	NO	\$23,114.16	72340	0016108	\$23,114.16	72340	16108	DEPÓSITO A LA CTA BBVA BANCOMER 6108 DE 12 DE OCT DE 2012 POR LA CANTIDAD DE \$46,228.32
75447	\$23,114.16	NO	\$23,114.16	75447		\$23,114.16	75447		
76652	\$23,114.16	NO	\$23,114.16	76652	0016124	\$23,114.16	76652	16124	DEPÓSITO A LA CTA BBVA BANCOMER 6124 DE 26 DE OCT DE 2012
77959	\$23,114.16	NO	\$23,114.16	77959	648	\$23,114.16	77959	648	DEPÓSITO A LA CTA BBVA BANCOMER 0648 DE 26 DE OCT DE 2012
79407	\$11,557.08	NO	\$11,557.08	79407	0016450	\$11,557.08	79407		DEPÓSITO A LA CTA BBVA BANCOMER DE 17 DE ENERO DE 2013
81932	\$23,114.16	NO	\$23,114.16	81932	704	\$23,114.16	81932		DEPÓSITO A LA CTA BBVA BANCOMER DE 11 DE ENERO DE 2013

■ **HR MC Hotel Company, S. de R.L. de C.V.⁹**

Documentación remitida por la Dirección de Auditoría			Documentación presentada por el partido en respuesta a los requerimientos formulados			Documentación remitida por los proveedores y prestadores de servicio en respuesta a los requerimientos			
Factura	Importe	Póliza de cheque	Monto	Factura	Cheque	Monto	Factura	Forma de Pago	
B1887	\$95,106.00	NO	\$95,106.00	B1887	NO	\$95,106.00	B1887	PAGO CON TRANSFERENCIA ****5008 DE 3 DE SEPT DE 2012, DE BBVA BANCOMER DE LA CTA *****3051	
B1795	\$48,399.80	NO	NO	NO	NO	\$48,399.80	B1795	PAGO EN EFECTIVO A CAJA DEL HOTEL	
B1794	\$134,406.00	NO	\$134,406.00	B1794	NO	\$134,406.00	B1794	PAGO CON TRANSFERENCIA ****5036 DE 30 DE AGO DE 2012, DE BBVA BANCOMER DE LA CTA *****3051	

⁹ En relación al proveedor, resulta procedente señalar que se observaron operaciones que no fueron reportadas, mismas que serán materia de análisis en otro apartado.

**CONSEJO GENERAL
P-UFRPP 56/13**

■ Sergio Rea Field

Documentación remitida por la Dirección de Auditoría			Documentación presentada por el partido en respuesta a los requerimientos formulados			Documentación remitida por los proveedores y prestadores de servicio en respuesta a los requerimientos			
Factura	Importe	Póliza de cheque	Monto	Factura	Cheque	Monto	Factura	Cheque	Forma de Pago
3838	\$8,389.34	NO	\$8,389.34	3838	0014515	\$8,389.34	3838	14515	CHEQUE 14515 DE BBVA BANCOMER CTA. *****3051 DE 10 FEBRERO 2012
3839	\$9,056.67	NO	\$9,056.67	3839	0014501	\$9,056.67	3839	14501	CHEQUE 14501 DE BBVA BANCOMER CTA. *****3051 DE 09 DE FEBRERO DE 2012 POR \$31,078.67
3840	\$10,963.33	NO	\$10,963.33	3840		\$10,963.33	3840		MISMO CHEQUE QUE LAS FACTURAS 3839 Y 3840
3843	\$11,058.67	NO	\$11,058.67	3843		\$11,058.67	3843		DEPÓSITO A LA CTA ***6933 DE BANAMEX POR \$22,784.67
3841	\$13,156.00	NO	\$13,156.00	3841	0014508	\$13,156.00	3841		MISMO DEPÓSITO QUE LA FACTURA 3841
3845	\$9,628.67	NO	\$9,628.67	3845		\$9,628.67	3845		DEPÓSITO A LA CTA ***6933 DE BANAMEX DE 2 DE MARZO DE 2012
3851	\$8,484.67	NO	\$8,484.67	3851	0014643	\$8,484.67	3851		CHEQUE 14736 DE BBVA BANCOMER CTA. *****3051 DE 14 DE MARZO DE 2012 POR \$34,034.00
3857	\$10,772.67	NO	\$10,772.67	3857	0014736	\$10,772.67	3857	14736	CHEQUE 15170 DE BBVA BANCOMER CTA. *****3051 DE 9 DE MAYO DE 2012 POR \$16,931.21
3860	\$23,261.33	NO	\$23,261.33	3860		\$23,261.33	3860		CHEQUE 15266 DE 25 DE MAYO DE 2012 POR \$10,868.00
3880	\$5,081.27	NO	\$5,081.27	3880	0015170	\$5,081.27	3880	15170	DEPÓSITO A LA CTA ***6933 DE BANAMEX DE 29 DE JUNIO DE 2012
3881	\$5,081.27	NO	\$5,081.27	3881		\$5,081.27	3881		CHEQUE 547 DE BBVA BANCOMER CTA. *****4736 DE 28 DE JUNIO DE 2012 POR \$15,253.34
3882	\$5,624.67	NO	\$5,624.67	3882		\$5,624.67	3882		DEPÓSITO A LA CTA ***6933 DE BANAMEX DE 23 DE JULIO DE 2012 POR \$29,744.01
3887	\$1,144.00	NO	\$1,144.00	3887		\$1,144.00	3887		DEPÓSITO A LA CTA ***6933 DE BANAMEX DE 29 DE JUNIO DE 2012
3885	\$10,868.00	NO	\$10,868.00	3885	0015266	\$10,868.00	3885	15266	DEPÓSITO A LA CTA ***6933 DE BANAMEX DE 10 DE SEPT DE 2012 POR \$49,764.00
3905	\$7,817.34	NO	\$7,817.34	3905	0015281	\$7,817.34	3905		MISMO DEPÓSITO QUE LAS FACTURAS 3940, 3957, 3958 Y 3959
3917	\$9,152.00	NO	\$9,152.00	3917	0000547	\$9,152.00	3917	547	DEPÓSITO A LA CTA ***6933 DE BANAMEX DE 05 DE OCT DE 2012
3918	\$6,101.34	NO	\$6,101.34	3918		\$6,101.34	3918		DEPÓSITO A LA CTA ***6933 DE BANAMEX DE 05 DE OCT DE 2012 POR \$16,016.00
3921	\$1,334.67	NO	\$1,334.67	3921	0015555	\$1,334.67	3921		DEPÓSITO A LA CTA 2826933 DE BANAMEX DE 24 DE DIC DE 2012 POR \$60,918.00
3924	\$13,918.67	NO	\$13,918.67	3924		\$13,918.67	3924		
3927	\$7,340.67	NO	\$7,340.67	3927		\$7,340.67	3927		
3928	\$7,150.00	NO	\$7,150.00	3928		\$7,150.00	3928		
3938	\$10,868.00	NO	NO	NO	NO	\$10,868.00	3938		
3940	\$3,718.00	NO	\$3,718.00	3940	0015884	\$3,718.00	3940		
3957	\$8,008.00	NO	\$8,008.00	3957		\$8,008.00	3957		
3958	\$6,006.00	NO	\$6,006.00	3958		\$6,006.00	3958		
3959	\$21,450.00	NO	\$21,450.00	3959		\$21,450.00	3959		
3967	\$10,582.00	NO	\$10,582.00	3967		\$10,582.00	3967		
3965	\$12,584.00	NO	\$12,584.00	3965	0015963	\$12,584.00	3965		
3968	\$7,722.00	NO	\$7,722.00	3968	0016016	\$7,722.00	3968		
3969	\$8,294.00	NO	\$8,294.00	3969		\$8,294.00	3969		
4134	\$7,722.00	NO	\$7,722.00	4134	0016599	\$7,722.00	4134		
4135	\$10,296.00	NO	\$10,296.00	4135		\$10,296.00	4135		
4136	\$12,584.00	NO	\$12,584.00	4136		\$12,584.00	4136		
4137	\$11,154.00	NO	\$11,154.00	4137		\$11,154.00	4137		
4139	\$10,868.00	NO	\$10,868.00	4139		\$10,868.00	4139		
4140	\$8,294.00	NO	\$8,294.00	4140		\$8,294.00	4140		

**CONSEJO GENERAL
P-UFRPP 56/13**

■ **María Estela Mendoza Batalla**

Documentación remitida por la Dirección de Auditoría			Documentación presentada por el partido en respuesta a los requerimientos formulados			Documentación remitida por los proveedores y prestadores de servicio en respuesta a los requerimientos			Diligencias de confirmación de forma de pago
Factura	Importe	Póliza de cheque	Monto	Factura	Cheque	Monto	Factura	Forma de Pago	Forma de Pago
3646	\$10,579.20	482	\$10,579.20	3646	482	\$10,579.20	3646	EFFECTIVO	CHEQUE 482
3664	\$11,089.60	424	\$11,089.60	3664	424	\$11,089.60	3664	EFFECTIVO	CHEQUE 424
3684	\$12,899.20	510	\$12,899.20	3684	510	\$12,899.20	3684	EFFECTIVO	CHEQUE 510
3695	\$11,089.60	482	\$11,089.60	3695	482	\$11,089.60	3695	EFFECTIVO	CHEQUE 482
3738	\$12,180.00	510	\$12,180.00	3738	510	\$12,180.00	3738	EFFECTIVO	CHEQUE 510
3727	\$10,509.60		\$10,509.60	3727		\$10,509.60	3727	EFFECTIVO	
3713	\$12,249.60	482	\$12,249.60	3717	482	\$12,249.60	3713	EFFECTIVO	CHEQUE 482
3754	\$11,020.00	510	\$11,020.00	3754	510	\$11,020.00	3754	EFFECTIVO	CHEQUE 510
3762	\$12,249.60		\$12,249.60	3762		\$12,249.60	3762	EFFECTIVO	
3774	\$12,829.60	482	\$12,829.60	3774	482	\$12,829.60	3774	EFFECTIVO	CHEQUE 482
3780	\$10,045.60		\$10,045.60	3780		\$10,045.60	3780	EFFECTIVO	
3807	\$13,050.00	510	\$13,050.00	3807	510	\$13,050.00	3807	EFFECTIVO	CHEQUE 510
3797	\$11,739.20		\$11,739.20	3797		\$11,739.20	3797	EFFECTIVO	
3823	\$9,929.60	581	\$9,929.60	3823	581	\$9,929.60	3823	EFFECTIVO	CHEQUE 581
3846	\$10,579.20		\$10,579.20	3846		\$10,579.20	3846	EFFECTIVO	
3861	\$12,365.60		\$12,365.60	3861		\$12,365.60	3861	EFFECTIVO	
3883	\$12,481.60		\$12,481.60	3883		\$12,481.60	3883	EFFECTIVO	
3889	\$10,068.80		\$10,068.80	3889		\$10,068.80	3889	EFFECTIVO	
3891	\$12,145.20		\$12,145.20	3891		\$12,145.20	3891	EFFECTIVO	
3906	\$11,089.50	605	\$11,089.50	3906	605	\$11,089.50	3906	EFFECTIVO	CHEQUE 605
3945	\$12,632.40		\$12,632.40	3945		\$12,632.40	3945	EFFECTIVO	
3952	\$12,713.60		\$12,713.60	3952		\$12,713.60	3952	EFFECTIVO	
3963	\$11,924.80		\$11,924.80	3963		\$11,924.80	3963	EFFECTIVO	
3982	\$12,388.80		\$12,388.80	3982		\$12,388.80	3982	EFFECTIVO	
4008	\$13,548.80		\$13,548.80	4008		\$13,548.80	4008	EFFECTIVO	
4024	\$12,574.40	642	\$12,574.40	4024	642	\$12,574.40	4024	EFFECTIVO	CHEQUE 642
4037	\$12,388.80		\$12,388.80	4037		\$12,388.80	4037	EFFECTIVO	
4049	\$12,388.80	673	\$12,388.80	4049	673	\$12,388.80	4049	EFFECTIVO	CHEQUE 673
4055	\$12,249.60	642	\$12,249.60	4055	642	\$12,249.60	4055	EFFECTIVO	CHEQUE 642
4059	\$11,089.60		\$11,089.60	4059		\$11,089.60	4059	EFFECTIVO	
4069	\$10,532.80	673	\$10,532.80	4069	673	\$10,532.80	4069	EFFECTIVO	CHEQUE 673
4080	\$11,379.60		\$11,379.60	4080		\$11,379.60	4080	EFFECTIVO	
4085	\$12,388.80	NO	NO	NO	NO	\$12,388.80	4085	EFFECTIVO	EFFECTIVO
4109	\$11,924.80	673	\$11,924.80	4109	673	\$11,924.80	4109	EFFECTIVO	CHEQUE 673
4121	\$13,618.40		\$13,618.40	4121		\$13,618.40	4121	EFFECTIVO	
4137	\$12,203.20		\$12,203.20	4137		\$12,203.20	4137	EFFECTIVO	
4160	\$12,899.20	NO	NO	NO	NO	\$12,899.20	4160	EFFECTIVO	EFFECTIVO
4172	\$11,948.00	NO	NO	NO	NO	\$11,948.00	4172	EFFECTIVO	EFFECTIVO
4192	\$12,203.20	NO	NO	NO	NO	\$12,203.20	4192	EFFECTIVO	EFFECTIVO
4204	\$14,094.00	NO	NO	NO	NO	\$14,094.00	4204	EFFECTIVO	EFFECTIVO
4212	\$14,569.60	NO	NO	NO	NO	\$14,569.60	4212	EFFECTIVO	EFFECTIVO
4228	\$13,409.60	NO	NO	NO	NO	\$13,409.60	4228	EFFECTIVO	EFFECTIVO
4243	\$11,808.80	NO	NO	NO	NO	\$11,808.80	4243	EFFECTIVO	EFFECTIVO

¹⁰ Derivado de la revisión realizada a los archivos que obran en el expediente se observó un error derivado de un *lapsus calami* al momento de capturar los montos en el anexo correspondiente a la observación final del Dictamen Consolidado presentado por la Dirección de Auditoría; se advirtió que el monto originalmente asentado es de \$667,325.30, siendo lo correcto el importe de \$657,325.30, mismo que generó una diferencia de \$10,000.00.

**CONSEJO GENERAL
P-UFRPP 56/13**

Documentación remitida por la Dirección de Auditoría			Documentación presentada por el partido en respuesta a los requerimientos formulados			Documentación remitida por los proveedores y prestadores de servicio en respuesta a los requerimientos			Diligencias de confirmación de forma de pago
Factura	Importe	Póliza de cheque	Monto	Factura	Cheque	Monto	Factura	Forma de Pago	Forma de Pago
4249	\$14,824.80	NO	NO	NO	NO	\$14,824.80	4249	EFFECTIVO	EFFECTIVO
4264	\$13,119.60	NO	NO	NO	NO	\$13,119.60	4264	EFFECTIVO	EFFECTIVO
4270	\$13,722.80	NO	NO	NO	NO	\$13,722.80	4270	EFFECTIVO	EFFECTIVO
4285	\$13,560.40	NO	NO	NO	NO	\$13,560.40	4285	EFFECTIVO	EFFECTIVO
4298	\$17,527.60	NO	NO	NO	NO	\$17,527.60	4298	EFFECTIVO	EFFECTIVO
4302	\$20,624.80	NO	NO	NO	NO	\$20,624.80	4302	EFFECTIVO	EFFECTIVO
4314	\$22,678.00	NO	NO	NO	NO	\$22,678.00	4314	EFFECTIVO	EFFECTIVO
4317	\$24,197.60	NO	NO	NO	NO	\$24,197.60	4317	EFFECTIVO	EFFECTIVO

Es preciso señalar que la información remitida por el partido político y las personas morales, en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización constituye una documental privada, a la cual se le otorga un valor indiciario simple y solamente genera pleno valor probatorio si se encuentra apoyada con otros elementos que confirmen tanto su autenticidad, como aquellas circunstancias con las que se pretenden relacionar los hechos materia de investigación.

Resulta menester precisar que respecto a la proveedora María Estela Mendoza Batalla, existe una discrepancia entre lo dicho por ésta, con la documentación remitida tanto por la Dirección de Auditoría como por el partido político incoado, toda vez que la primera refiere que el pago de las facturas se realizó en efectivo y los segundos señalan que los mismos se llevaron mediante cheques.

Derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización ejerció sus facultades investigadoras, razón por la cual, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitiera copia certificada de los cheques proporcionados por el sujeto obligado, insitución que remitió los mismos, con lo cuál la autoridad electoral tuvo convicción que el método de pago de las facturas relacionadas con la proveedora María Estela Mendoza Batalla se realizó a través de cheques.

Por otra parte, se tiene que esta autoridad electoral, al realizar el cruce de información obtenida a través de los requerimientos realizados, logró confirmar la realización de las operaciones efectuadas entre los proveedores enlistados en los cuadros precedentes, con el Partido Revolucionario Institucional; esto es así ya que la información que obra en el expediente correspondiente a la Dirección de Auditoría, coincide con la proporcionada por el partido político en cuestión o en su caso, con la brindada por el proveedor requerido.

Precisado lo anterior, una vez que se contó con los elementos de prueba idóneos mismos que concatenados entre sí, permiten a esta autoridad electoral concluir fehacientemente que las diferencias advertidas entre los montos obtenidos de las circularizaciones realizadas con los proveedores materia del presente procedimiento y los reportados por el sujeto obligado, resultaron de un error al registrar contablemente las operaciones por parte del sujeto obligado.

En conclusión, si bien es cierto que existieron inconsistencias al momento de registrar contablemente las operaciones por parte del Partido Revolucionario Institucional, también lo es, que esta autoridad electoral cuenta con la documentación comprobatoria suficiente para determinar el origen, monto y destino de los recursos ejercido por el partido incoado por lo que respecta a los proveedores precisados con atención en el marco del ejercicio ordinario del año 2012.

En razón de lo vertido anteriormente, se considera que no existen elementos que configuren una conducta infractora de lo establecido en los artículos 38, numeral 1, inciso a), 83, numeral 1, inciso b), fracción II y 342, numeral 1, inciso I) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización; razón por la cual, se considera que el Partido Revolucionario Institucional no vulnera la normatividad en materia de fiscalización en relación con las operaciones analizadas, en consecuencia, el presente apartado debe declararse **infundado**.

B. Operaciones no reportadas.

En el presente apartado se analizará el destino de los recursos respecto a la contratación de tres servicios de eventos relacionados con el proveedor HR MC Hotel Company, S. de R.L. de C.V.; a fin de estar en aptitud de determinar el origen de las diferencias detectadas por la autoridad durante la revisión del informe anual aludido.

Ahora bien, como fue establecido previamente de las diligencias realizadas por esta autoridad se solicitó a los prestadores y/o proveedores de servicios con los que el partido realizó las operaciones materia de análisis, a efecto de que confirmaran el origen, destino y aplicación de los recursos utilizados, así pues derivado de la revisión a la información remitida por el proveedor HR MC Hotel Company, S. de R.L. de C.V., se detectaron inconsistencias en las operaciones reportadas por el partido por un monto de \$143,808.73 (ciento cuarenta y tres mil ochocientos ocho pesos 73/100 M.N.).

**CONSEJO GENERAL
P-UFRPP 56/13**

En virtud de lo anterior, se requirió aportara mayores elementos a efecto que esta autoridad determinar la posible comisión de una conducta infractora a la normatividad electoral por parte del sujeto obligado.

En este sentido, mediante oficio UF/DRN/0370/2014 se le solicitó al proveedor en cuestión aportara más información respecto a tres facturas y tres recibos, relacionadas con las operaciones realizadas con el proveedor. Al respecto, en su respuesta, el proveedor remitió lo siguiente:

- Copia de tres recibos relacionados con los servicios prestados.
- Copia de cuatro contratos de prestación de servicios correspondientes a los recibos señalados en el punto anterior.
- Copia de los comprobantes de los pagos realizados.

Cabe señalar que esta Autoridad además de los datos e información allegada y su respectiva valoración en los términos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización y el resto de la Legislación Electoral aplicable, se encontraba obligada a practicar diligencias propias de investigación a efectos de dotarse de una conclusión certera y robusta que en atención al principio de exhaustividad, requiere toda labor de fiscalización en materia electoral, para poder conocer si los elementos proporcionados por el proveedor son suficientes para esclarecer los hechos de los cuales pudiera advertirse una conducta ilícita.

Por lo anterior, se solicitó a la Dirección de Auditoría y al instituto político, informaran el apartado en que fueron reportadas las operaciones en comento, para mayor claridad, las respuestas recibidas se detallan a continuación:

Documentación presentada por el partido a la Dirección de Auditoría durante la revisión del informe anual				Documentación presentada por el Partido a requerimiento de autoridad durante la sustanciación del procedimiento				Documentación presentada por HR MC HOTEL COMPANY S. DE R.L. DE C.V. a requerimiento de autoridad		
Factura	Monto	Póliza de cheque	Observación	Monto	Factura	Cheque	Observación	Monto	Factura	Forma de pago
*	*	*	Informó que, del análisis a la documentación en su poder, así como de los registros contables del	*	*	*	El Partido, menciona no tener registro alguno de dichas ordenes, desconociendo la contratación de dichos servicios mediante tales órdenes.	\$38,399.60	Orden 37429	Depósito en efectivo en HSBC por \$20,000.00 DE 01/10/2012 y Depósito en efectivo en HSBC por \$18,400.00 DE 02/10/2012
*	*	*	Partido en el marco de revisión del informe anual 2012, no se localizó registro alguno, así como documentación al respecto.	*	*	*		\$24,546.20	Orden 37738	Depósito en efectivo en HSBC por \$12,047.00 DE 21/11/2012, y depósito en HSBC por \$12,500.00 de fecha 16/11/2012
*	*	*		*	*	*		\$80,862.53	Orden 37239	Depósito en efectivo de \$80,862.53 DE 04/09/2012
TOTAL								\$143,808.73		

Aunado a lo anterior, se considera pertinente referir que en el que atañe a estas operaciones, el proveedor manifestó en sus escritos de respuesta¹¹, lo que a la letra señala:

Primer escrito

*“(…)A. en atención y cumplimiento de los incisos 1, 2 y 4 del Requerimiento, y con el propósito de proporcionar (i) todos los contratos que amparen prestación de servicios y su facturación correspondiente, precisando la fecha de celebración de los contratos respectivos, así como las condiciones para su cumplimiento y toda aquella documentación que acredite su dicho; (ii) documentación que acredite el monto forma de pago correspondiente a cada prestación de servicios a favor del PRI, relacionando los mismos con el servicio realizado por su representada, el contrato y la factura correspondiente; adjunto al presente escrito de contestación y cumplimiento al Requerimiento encontraran la siguiente documentación comprobatoria:
(…)*

Anexo ‘D’

- 1) Recibo No. BAN 0040 de fecha 02 de octubre de 2012 por la cantidad de \$20,000.00 Pesos M.N.;*
- 2) Comprobante de cargo a tarjeta de Crédito (HSBC) con No. De Referencia 17411 de fecha 01 de octubre de 2012 por la cantidad de \$20,000.00 Pesos M.N.;*
- 3) Desglose de las operaciones bancarias reflejando el cargo a tarjeta de Crédito con No. de Referencia 17411 de fecha 01 de octubre de 2012 por la cantidad de \$20,000.00 Pesos M.N.;*
- 4) Desglose de las operaciones bancarias reflejando de la aplicación del cargo a tarjeta de Crédito con No. de Referencia 17411 de fecha 01 de octubre de 2012 por la cantidad de \$20,000.00 Pesos M.N.;*
- 5) Orden No. 37429 de fecha 04 de octubre de 2012 por la cantidad total de \$38,399.60 Pesos M.N. (Recibo No. BAN 0049 y Recibo No. BAN 0052);*
- 6) Contrato de Prestación de Servicios de Eventos Sociales celebrado entre la Sociedad y el PRI, de fecha 29 de septiembre de 2012, estipulando un presupuesto por la prestación de servicios por la cantidad de \$38,399.60 Pesos M.N. (Recibo No. BAN 0049 y Recibo No. BAN 0052).*

¹¹ Debe precisarse que la información y documentación remitida por el proveedor en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, constituyen documentales privadas, las cuales se les otorga un valor indiciario simple y solamente generan pleno valor probatorio si se encuentran apoyadas con otros elementos que confirmen tanto su autenticidad, como aquellas circunstancias con las que se pretenden relacionar los hechos materia de investigación.

Anexo 'E'

- 1) Recibo No. BAN 0052 de fecha 03 de octubre de 2012 por la cantidad de \$18,400.00 Pesos M.N.;
- 2) Comprobante de cargo a tarjeta de Crédito (HSBC) con No. de Referencia 17431 de fecha 02 de Octubre de 2012 por la cantidad de \$18,400.00 Pesos M.N.;
- 3) Desglose de las operaciones bancarias reflejando el cargo a tarjeta de Crédito de fecha 04 de Octubre de 2012 por la cantidad de \$18,400.00 Pesos M.N.;
- 4) Orden No. 37429 de fecha 04 de octubre de 2012 por la cantidad total de \$38,399.60 Pesos M.N. (Recibo No. BAN 0049 y Recibo No. BAN 0052);
- 5) Contrato de Prestación de Servicios de Eventos Sociales celebrado entre la Sociedad y el PRI, de fecha 29 de septiembre de 2012, estipulando un presupuesto por la prestación de servicios por la cantidad de \$38,399.60 Pesos M.N. (Recibo No. BAN 0049 y Recibo No. BAN 0052).

Anexo 'F'

- 1) Recibo de Pago No. CHK 16 de fecha 21 de noviembre de 2012 por la cantidad de \$24,546.20 Pesos M.N.;
- 2) Comprobante de cargo a tarjeta de Crédito con No. de Referencia 17860 de fecha 21 de noviembre de 2012 por la cantidad de \$12,047.00 Pesos M.N.;
- 3) Comprobante de cargo a tarjeta de Crédito (HSBC) de fecha 16 de noviembre de 2012 por la cantidad de \$12,500.00 Pesos M.N.;
- 4) Estado de cuenta con los movimientos de la cuenta No. XXXXXX0467 de la que es titular la Sociedad, reflejando los abonos respectivos (i) por la cantidad de \$12,047.00 Pesos M.N. de fecha 21 de noviembre de 2012, y (ii) por la cantidad de \$12,500.00 Pesos M.N. de fecha 16 de noviembre de 2012.
- 5) Orden No. 37738 de fecha 21 de noviembre de 2012 por la cantidad total de \$24,546.20 Pesos M.N.;
- 6) Contrato de Prestación de Servicios de Eventos Sociales celebrado entre la Sociedad y el PRI, de fecha 15 de Noviembre de 2012, estipulando un presupuesto por la prestación de servicios por la cantidad de \$24,546.20 Pesos M.N. (...)"

Segundo escrito

"(...) i. El depósito en efectivo por la cantidad de \$80,862.53 (ochenta mil ochocientos sesenta y dos pesos 53/100 M.N.) se derivó (a) de los servicios prestados por la Sociedad en favor del PRI, con relación a la organización de

un evento social para 200 personas, el cual se llevó a cabo el día 04 de septiembre de 2012 en el salón Constelaciones 'C' ubicado en el Hotel Hyatt ubicado en Campos Elíseos Número 204, Colonia Polanco en México D.F., así como (b) de los gastos extras originados durante dicho evento social;

ii. Copia del contrato de prestación de servicios de eventos sociales de fecha 03 de septiembre de 2012, celebrado por la Sociedad como prestador de servicio y por el PRI como consumidor, se adjunta al presente escrito como Anexo 'A'.

iii. Copia de la Orden del Evento número 37239 de fecha 04 de septiembre de 2014, especificando los gastos extras originados durante el evento contratado, se adjunta al presente escrito como Anexo 'B'.

2. En atención y cumplimiento del inciso "2" del Requerimiento, adjunto al presente escrito se anexa como Anexo 'C' copia del comprobante de ingreso del depósito en efectivo por la cantidad de \$80,862.53 pesos en la Caja General del Hotel el día 4 de Septiembre a las 05:24PM. (...)"

Del análisis a la información y documentación presentada por el proveedor se advierte la prestación de tres servicios para el Partido Revolucionario Institucional, consistentes en eventos sociales realizados el cuatro y veintinueve de septiembre, así como el veintinueve de noviembre, todos del año dos mil doce; de conformidad con los contratos correspondientes a cada uno de los servicios y la debida documentación comprobatoria de los pagos efectuados.

Al respecto, es menester mencionar que, tal y como se advierte de la transcripción de las respuestas proporcionadas por el proveedor a los requerimientos formulados, obran el expediente en cuestión los contratos de prestación de servicios, los comprobantes de los pagos realizados y el desglose de las operaciones bancarias que reflejan los mismos, relacionados con las ordenes 37429 y 37738, así como copia del comprobante de ingreso en efectivo correspondiente al pago de la orden 37239 por lo que se tiene certeza de la realización y el pago de los servicios que no fueron reportados por el Partido Revolucionario Institucional.

Para ilustrar claramente la conciliación de cifras y estas condiciones de demostrar la omisión en el reporte de los eventos que han quedado detallados, se exponen los siguientes datos:

1. La Dirección de Auditoría de la Unidad Técnica de Fiscalización informó que únicamente el Partido Revolucionario Institucional había reportado en su

**CONSEJO GENERAL
P-UFRPP 56/13**

informe anual del dos mil doce, tres operaciones con el proveedor HR MC Hotel Company, S. de R.L. de C.V. las cuales son las siguientes:

Documentación remitida por la Dirección de Auditoría			Documentación presentada por el partido en respuesta a los requerimientos formulados			Documentación remitida por los proveedores y prestadores de servicio en respuesta a los requerimientos		
Factura	Importe	Póliza de cheque	Monto	Factura	Cheque	Monto	Factura	Forma de Pago
B1887	\$95,106.00	NO	\$95,106.00	B1887	NO	\$95,106.00	B1887	PAGO CON TRANSFERENCIA ****5008 DE 3 DE SEPT DE 2012, DE BBVA BANCOMER DE LA CTA *****3051
B1795	\$48,399.80	NO	NO	NO	NO	\$48,399.80	B1795	PAGO EN EFECTIVO A CAJA DEL HOTEL
B1794	\$134,406.00	NO	\$134,406.00	B1794	NO	\$134,406.00	B1794	PAGO CON TRANSFERENCIA ****5036 DE 30 DE AGO DE 2012, DE BBVA BANCOMER DE LA CTA *****3051

2. Por su parte, el proveedor HR MC Hotel Company, S. de R.L. de C.V. -una vez que se realizó la circularización de operaciones- confirmó que además de las transacciones que había reportado el Partido Revolucionario Institucional en su informe anual del dos mil doce, también había celebrado tres eventos que son los siguientes:

Documentación presentada por HR MC HOTEL COMPANY S. DE R.L. DE C.V. a requerimiento de autoridad		
Monto	Factura	Forma de pago
\$38,399.60	Orden 37429	Depósito en efectivo en HSBC por \$20,000.00 DE 01/10/2012 y Depósito en efectivo en HSBC por \$18,400.00 DE 02/10/2012
\$24,546.20	Orden 37738	Depósito en efectivo en HSBC por \$12,047.00 DE 21/11/2012, y depósito en HSBC por \$12,500.00 de fecha 16/11/2012
\$80,862.53	Orden 37239	Depósito en efectivo de \$80,862.53 DE 04/09/2012
\$143,808.73		

3. En este sentido, esta autoridad cuenta con los elementos de prueba idóneos que concluir fehacientemente que el Partido Revolucionario Institucional, incumplió con su obligación de reportar la totalidad de los egresos realizados durante el ejercicio dos mil doce, como lo fueron los gastos por concepto de eventos, contratados con la persona moral denominada HR MC Hotel Company, S de R.L. de C.V., por un monto total de \$143,808.73 (ciento cuarenta y tres mil ochocientos ocho pesos 73/100 M.N.).

En consecuencia, se considera que existen elementos que configuran una conducta infractora a la normatividad aplicable en materia de fiscalización atribuible al Partido Revolucionario Institucional, violentando lo dispuesto por los artículos 83, numeral 1, inciso b), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, de ahí que el presente apartado debe declararse **fundado**.

6. Individualización de la sanción. Ahora bien, toda vez que se ha acreditado la realización de una conducta que violenta los artículos 83, numeral 1, inciso b), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, al omitir reportar gastos por concepto de eventos, por un monto de **\$143,808.73 (ciento cuarenta y tres mil ochocientos ocho pesos 73/100 M.N.)**, se procede en la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a) Valor protegido o trascendencia de la norma.
- b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto.
- c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.
- d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
- e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
- f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.
- g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
- h) La capacidad económica del sujeto infractor.

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del Partido Político Nacional de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad se identificó que el Partido Revolucionario Institucional omitió reportar gastos por concepto de eventos sociales contratados con el proveedor HR MC Hotel Company, S. de R.L. de C.V. por un monto que asciende a **\$143,808.73**.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del Partido Revolucionario Institucional, consistente en haber incumplido con su obligación de garante, al no reportar los gastos materia de análisis, en el informe Anual correspondientes al ejercicio 2012, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 83, numeral 1, inciso b), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

Modo: El partido político infractor omitió reportar en el Informe Anual correspondiente al ejercicio 2012, el egreso relativo a eventos sociales contratados

con el proveedor HR MC Hotel Company, S. de R.L. de C.V por un monto que asciende a \$143,808.73 (ciento cuarenta y tres mil ochocientos ocho pesos 73/100 M.N.).

Tiempo: La irregularidad atribuida al partido surgió del estudio a través de la revisión del Informe Anual sobre el origen y destino de los recursos, de los partidos políticos correspondiente al ejercicio 2012.

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la entonces Unidad de Fiscalización, ubicadas en Avenida Acoxpa número 436, Colonia Exhacienda de Coapa, Delegación Tlalpan, C.P. 14300, México, Distrito Federal.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del Partido Revolucionario Institucional para obtener el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del instituto político para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de Partidos Políticos Nacionales, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir registrar contablemente los egresos realizados dentro de las actividades ordinarias correspondientes al ejercicio 2012.

Así las cosas, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien, impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el partido de mérito viola los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos.

Al omitir reportar gastos por concepto de contratación de servicios de eventos sociales, el partido en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 83, numeral 1, inciso b), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales¹² y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización¹³ que a la letra señalan:

Del citado artículo 83 se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes anuales correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que ésta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar por el partido político para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

¹² “**Artículo 83.** 1. Los partidos políticos deberán presentar ante la Unidad los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas: (...) b) Informes anuales: (...) II. En el informe anual serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe.”

¹³ “**Artículo 149.** 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original que expida a nombre del partido, agrupación, organizaciones de observadores u organización de ciudadanos, la persona a quien se efectuó el pago. Dicha documentación deberá cumplir con todos los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables, con excepción de lo señalado en los artículos 164, 166 al 168 del Reglamento. (...)”

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Por su parte el artículo 149 del Reglamento de Fiscalización, establece las obligaciones siguientes respecto a sus egresos: 1) la obligación de los sujetos obligados, de registrar contablemente sus egresos; 2) soportar todos los egresos con documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de la persona a quien el partido efectuó el pago; 3) la obligación a cargo de los sujetos obligados de entregar la documentación antes mencionada con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables.

En síntesis, la norma señalada regula diversas situaciones específicas, entre otras, la obligación a cargo de los sujetos obligados de presentar el registro contable de sus egresos con la documentación original expedida a su nombre por la persona a quien efectuó el pago correspondiente, relativos al ejercicio que se revisa, para lo cual la autoridad fiscalizadora, puede solicitar en todo momento a dicha documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes. De ésta manera, se otorga transparencia a la autoridad electoral en su actividad fiscalizadora cuando se trate de los egresos que realizan los sujetos obligados, también se les impone claramente la obligación de entregar la documentación original soporte de sus egresos cuando la autoridad lo solicite.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el Partido Revolucionario Institucional se ubica dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 83, numeral 1,

inciso b), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto debe tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta.

Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquellas que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.

En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración al supuesto contenido en la norma.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que, en las infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas infracciones son siempre de resultado.

En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada la conducta.

En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por la conducta señalada es garantizar certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se deben conducir los partidos políticos en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En el presente caso la irregularidad imputable al partido se traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, consistente en cumplir con la obligación de reportar el gasto de los recursos que obtenga para el desarrollo de sus fines.

En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en **una falta de fondo**, cuyo objeto infractor concurre directamente en tener certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el Partido.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los partidos políticos.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el Partido Revolucionario Institucional cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO** o de **FONDO**, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 83, numeral 1, inciso b), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 342, numeral 1, inciso I) del Código Electoral Federal, lo procedente es imponer una sanción.

Calificación de la falta

Para la calificación de la falta, resulta necesario tener presente las siguientes consideraciones:

- Que se trata de una falta sustantiva o de fondo, toda vez que el partido político impidió a la autoridad fiscalizadora tener transparencia respecto del gasto de los recursos erogados consistentes en la contratación de servicios de eventos sociales.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización; esto es, certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
- Que se advierte la omisión de dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas en las disposiciones aplicables en la materia.
- Que la conducta fue singular.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

1. Calificación de la falta cometida.

Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por Partido Revolucionario Institucional se califica como **GRAVE ORDINARIA**.

Lo anterior es así, en razón de que se tratan de faltas de fondo o sustantivas en las que se vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, toda vez que el Partido Revolucionario Institucional omitió registrar el gasto realizado como parte de las actividades ordinarias, considerando que el bien jurídico tutelado por la norma transgredida es de relevancia para el buen funcionamiento de la actividad fiscalizadora y el correcto manejo de los recursos de los partidos políticos.

En ese contexto, el Partido Revolucionario Institucional debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las normas a que se han hecho referencia.

2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por las irregularidades que desplegó el partido político y si ocasionó un menoscabo en los valores jurídicamente tutelados.

Debe considerarse que el hecho de que Partido Revolucionario Institucional no cumpla con su obligación de reportar la totalidad de los gastos por concepto de actividades ordinarias. Por lo tanto, la irregularidad se tradujo en una falta que impidió que la autoridad electoral conociera con plena certeza el modo en que el partido utilizó diversos recursos. Por lo tanto, no debe perderse de vista que las conductas descritas, vulneran directamente el principio de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

En ese tenor, la falta cometida por el partido es sustantiva y el resultado lesivo es significativo, toda vez que omitió reportar la totalidad de los gastos realizados en el informe anual respectivo situación que, como ya ha quedado expuesto, vulnera los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el Partido Revolucionario Institucional no es reincidente respecto de las conductas que aquí se han analizado.

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Revolucionario Institucional cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así, mediante el Acuerdo **INE/CG339/2017** emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria del dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2018 un total de \$1,094,896,674 (mil noventa y cuatro millones ochocientos noventa y seis mil seiscientos setenta y cuatro pesos M.N.).

En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones

**CONSEJO GENERAL
P-UFRPP 56/13**

económicas del infractor no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al Partido Revolucionario Institucional por este Consejo General, así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones:

Número	Resolución del Consejo General	Monto total de la sanción	Montos de deducciones realizadas al mes de agosto de 2018	Montos por saldar
1	CG260/2018	\$18,872.50	\$18,872.30	\$0.30
2	CG190/2013	\$13,087,011.52	\$602,93.17	\$12,484,818.35
3	CG190/2013	\$1,679,293.60	\$72,993.11	\$1,606,300.49
4	CG190/2013	\$656,315.13	\$27,372.42	\$628,942.71
5	CG190/2013	\$1,479,299.01	\$63,868.97	\$1,415,430.04
6	CG190/2013	\$8,954,838.10	\$410,586.25	\$8,544,251.85
7	CG190/2013	\$16,140,773.41	\$739,055.25	\$15,401,718.16
8	CG190/2013	\$7,343,198.93	\$337,593.14	\$7,005,605.79
9	CG190/2013	\$1,453,060.38	\$63,868.97	\$1,389,191.41
10	CG190/2013	\$1,152,000.00	\$54,744.83	\$1,097,255.17
11	CG190/2018	\$1,363,018.99	\$63,868.97	\$1,299,150.02
12	CG190/2013	\$884,616.00	\$36,496.56	\$848,119.44
13	CG190/2013	\$9,440,589.36	\$437,958.67	\$9,002,630.69
14	CG190/2013	\$12,428,809.06	\$574,820.75	\$11,853,988.31
15	CG190/2013	\$637,675.15	\$27,372.42	\$610,302.73
16	CG190/2013	\$1,678,268.56	\$72,993.11	\$1,605,275.45
17	CG190/2013	\$1,222,257.24	\$54,744.83	\$1,167,512.41
18	CG190/2013	\$1,346,759.95	\$63,868.97	\$1,282,890.98

**CONSEJO GENERAL
P-UFRPP 56/13**

Número	Resolución del Consejo General	Monto total de la sanción	Montos de deducciones realizadas al mes de agosto de 2018	Montos por saldar
19	CG190/2013	\$1,184,258.99	\$54,744.83	\$1,129,514.16
20	CG190/2013	\$2,216,437.62	\$100,365.53	\$2,116,072.09
21	CG190/2013	\$25,187,647.32	\$1,158,765.64	\$24,028,881.68
22	CG242/2013	\$652,983.07	\$118,613.71	\$534,369.36
23	CG242/2013	\$2,702,722.17	\$501,826.85	\$2,200,895.32

De lo anterior, se advierte que el Partido Revolucionario Institucional tiene un saldo pendiente de \$107,253,116.91 (ciento siete millones doscientos cincuenta y tres mil ciento dieciséis pesos 91/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 354, numeral 1, inciso a)¹⁴ del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

¹⁴ "I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de este Código; V. La violación a lo dispuesto en el inciso p) del párrafo 1 del artículo 38 de este Código se sancionará con multa; durante las precampañas y campañas electorales, en caso de reincidencia, se podrá sancionar con la suspensión parcial de las prerrogativas previstas en los artículos 56 y 71 de este ordenamiento; y VI. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político."

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción.

No sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los Partidos Políticos Nacionales, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Por lo anterior, a continuación, se detallan las características de la falta analizada.

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el partido político, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el partido político conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe Anual.
- El Partido Político Nacional no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$143,808.73 (ciento cuarenta y tres mil ochocientos ocho pesos 73/100 M.N.).

- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad de conducta cometidas por el partido político.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 354, numeral 1, inciso a), fracción I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del Partido Político Nacional infractor, una amonestación pública sería poco idónea para disuadir la conducta infractora como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción prevista en la fracción VI consistente en la cancelación del registro como partido político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente político sancionado del sistema existente.

Las sanciones contempladas en las fracciones IV y V no son aplicables a la materia competencia del presente procedimiento.

Asimismo, la sanción contenida en la fracción VI consistente en la cancelación del registro como partido político se estima aplicable cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente político sancionado del sistema existente.

En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquella que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso¹⁵.

¹⁵ Cfr. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó en el recurso de apelación SUP-RAP-257/2008, que cuando con la conducta imputada se obtenga un beneficio económico la sanción debe incluir, por lo menos, el monto beneficiado; en el caso concreto la sanción debe corresponder a aquella que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso.

En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el Partido Revolucionario Institucional se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla general, que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos elementos, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en la Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-RAP-62/2008.

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que las mismas son clasificables como grave ordinaria, ello como consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta de **omitir reportar el gasto** y las normas infringidas [83, numeral 1, inciso b), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización], la singularidad y el objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al Partido Revolucionario Institucional debe ser mayor al monto del beneficio obtenido, en razón **de la trascendencia de las normas trasgredidas al omitir reportar el egreso**, lo cual ya ha sido analizado en el considerando 5, apartado B de esta Resolución, por lo que procede sancionar al partido político, con una sanción económica equivalente al **150% (ciento cincuenta por ciento)** sobre el monto involucrado de **\$143,808.73 (ciento cuarenta y tres mil ochocientos ocho pesos 73/100 M.N.)**, cantidad que asciende a un total de **\$215,713.09 (doscientos quince pesos setecientos trece mil 09/100 M.N.)**.¹⁶

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a **3,460 (tres mil cuatrocientos sesenta)** días de salario mínimo general vigente del entonces Distrito Federal durante el ejercicio dos mil doce¹⁷, misma que asciende a la cantidad de **\$215,661.80 (doscientos quince mil seiscientos sesenta y un pesos 80/100 M.N.)**, la cual es equivalente a **2,675 (dos mil setecientos setenta y cinco)** Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de **\$215,605.00 (doscientos quince mil seiscientos cinco pesos 00/100 M.N.)**.¹⁸

7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

¹⁶ Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final puede presentar una variación derivado de la conversión a días de salario mínimo.

¹⁷ El salario mínimo en el ejercicio 2012, equivalía a \$62.33 (sesenta y dos pesos 33/100 M.N.)

¹⁸ Cabe señalar que la diferencia entre el importe indicado en días de salario mínimo y el monto señalado como final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil dieciocho.

R E S U E L V E

PRIMERO. Se declara **infundado** el procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de Partido Revolucionario Institucional, en los términos del **Considerando 5, Apartado A** de la presente Resolución.

SEGUNDO. Se declara **fundado** el presente procedimiento sancionador electoral, instaurado en contra del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo expuesto en el **Considerando 5, Apartado B** de la presente Resolución.

TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el **Considerando 6**, se impone como sanción al **Partido Revolucionario Institucional**, multa equivalente a **3,460 (tres mil cuatrocientos sesenta)** días de salario mínimo general vigente del entonces Distrito Federal durante el ejercicio dos mil doce, misma que asciende a la cantidad de **\$215,661.80 (doscientos quince mil seiscientos sesenta y un pesos 80/100 M.N.)**, la cual es equivalente a **2,675 (dos mil setecientos setenta y cinco)** Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de **\$215,605.00 (doscientos quince mil seiscientos cinco pesos 00/100 M.N.)**

CUARTO. Notifíquese la presente Resolución.

QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo._____

Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución, identificado en el orden del día con el número de apartado 10.2._____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Pamela San Martín._____

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias Consejero Presidente._____

En este caso estamos analizando un Procedimiento Oficioso, iniciado desde que se revisaron los informes anuales de los Partidos Políticos Nacionales en el 2012, y la razón por la que se inició este procedimiento fue que al revisar los informes anuales se encontraron 702 Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, que amparaban 3.2 millones aproximadamente, que carecen de la actividad política realizada y el tipo de campaña que habían beneficiado._____

Eran Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas correspondientes a la Coalición “Movimiento Progresista”, y la Coalición “Movimiento Progresista” únicamente participó en el Proceso Electoral del 2011-2012, por lo que se inicia este procedimiento._____

Una vez que se da vista a la Unidad Técnica de Fiscalización, se empieza hacer una larga investigación, y de hecho se hace una investigación bastante exhaustiva, se hace requerimiento, tanto a los beneficiarios de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, se investiga con la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, y se advierte que los recursos que se dispersaron y que amparaban las cantidades de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas se dispersaron vías cheques, entonces, se investiga con quienes son los beneficiarios de esos cheques._____

Asimismo, se investiga con los Comités Directivos estatales del Partido de la Revolución Democrática, que el partido que traía estos recibos en su contabilidad._____

Por último, se hace un requerimiento a los partidos involucrados, que eran los 3 integrantes de la Coalición “Movimiento Progresista”, el Comité Ejecutivo Nacional de los 3. _____

Ahora, cuando se hace esta, investigación es muy completa, sin embargo, la diferencia que yo tengo es con el uso que se le da a cada una de las partes de la investigación, porque el Proyecto de Resolución empieza armándose a partir de la respuesta de los beneficiarios de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, es decir, hay el esqueleto del Proyecto de Resolución, parte de si los beneficiarios de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas reconocieron o no reconocieron haber recibido estos recibos y haber recibido los recursos, bueno, haber suscrito los recibos y haber recibido los recursos a que se hace referencia en esos recibos. _____

Y aquí hay 3 universos que se desprenden de la respuesta que nos dan los beneficiarios de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas. Sin embargo, me parece que lo que no se toma en cuenta respecto de la información que nos dan los beneficiarios de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas y que se vuelve un tema muy relevante, es ¿por qué los tienen?, ¿por qué los firmaron?, ¿en qué consistió la actividad política que realizaron? Porque, y sí nos contestaron los beneficiarios de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, sí nos dijeron por qué recibieron esos recursos, por qué firmaron esos recibos. _____

Y sin embargo, obviamos por completo cuál fue la respuesta que nos dieron los beneficiarios de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas. _____

Y nos vamos a la segunda línea, que son destinatarios de los cheques, y les preguntamos a ellos qué fue lo que hicieron, algunos nos dijeron que se lo reintegraron al endosante o al Comité Directivo Estatal, otros nos dicen que dispersaron el recurso a representantes de casilla o a promotores del voto, otros nos dice que el recurso se utilizó para desarrollar los trabajos del voto, y otros no nos contestaron. _____

Sin embargo, aquí empezamos a tener una coincidencia con lo que nos dijeron los propios beneficiarios de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, porque en un porcentaje de los beneficiarios de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas lo que nos dijeron es que, firmaron todos esos Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, porque fungieron como representantes de casilla o como representantes generales, o formaron parte de la estructura de promoción del voto. ____ Luego, vamos a la tercera línea de investigación que es preguntarle a los Comités Directivos Estales, y específicamente llama la atención el caso de Chihuahua que nos dice que los cheques fueron utilizados para el pago de estructura electoral y de promoción del voto; y el caso de Tabasco, que nos mencionan que los recursos fueron entregados a los candidatos a Diputados Federales, para el apoyo a las personas que fueron acreditadas como representantes de casilla o representantes generales del Partido de la Revolución Democrática. _____

Es decir, de las primeras 3 líneas de investigación, lo que tenemos es que al menos un porcentaje de esos recursos se emplearon para la promoción del voto y para representantes generales, y para representantes de casilla, y esto ahora voy a regresar por qué enfatizo que las 3 primeras líneas de investigación nos llevan a que hubieron gastos por representantes generales y representantes de casilla. _____

Porque cuando les preguntamos a los partidos políticos, al Comité Ejecutivo Nacional, ellos nos dicen que se utilizaron los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas exclusivamente para beneficiar a las campañas de las Senadurías, y específicamente en una entidad en Campeche, solamente para uno de los 2 candidatos a Senadores, no para el otro. _____

Eso es lo que nos dicen los partidos políticos, pero esto se contradice con todo lo que nos dicen las otras fuentes de prueba que tenemos y con todo respeto se tiene que decir, los primero que pueden querer jugar con las cifras, son los representantes de los

partidos políticos, porque pueden ver quién puede o no rebasar topes de gastos de campaña, si se le suman recursos y, sin embargo, a los únicos que les creemos es a los representantes ante el Comité Ejecutivo Nacional de los Partidos Políticos. _____

Y lo que se decide es que los recursos solamente se van a tomar como un beneficio a las campañas, a las Senadurías y solamente se le contabilizan a los topes a esos candidatos, sin tomar en cuenta el resto de las evidencias que tenemos en cuanto a que fueron beneficiados tanto Diputados Federales, por parte de Comités Ejecutivos Distritales como que se utilizaron estos recursos para los representantes ante la casilla y representantes generales. _____

¿Y por qué se vuelve relevante que se hayan empleado para representantes de casilla y representantes generales? Precisamente, porque el representante de casilla, no vigila el voto a favor de uno de los 3 candidatos que participó en la elección; vigila el voto a favor de todos los candidatos que participan por el partido político por el que fue acreditado. _____

Por lo que, me parece que esto es algo con lo que no estamos teniendo una Resolución acorde a las constancias que tenemos en el expediente. _____

Y, sin embargo, en un apartado que es el apartado C, que se agrupan a los ciudadanos, que negaron la recepción de los recursos, porque desconocen la firma, incluso llegamos al punto de regresar al único valor que le estamos dando a los beneficiarios para que estos no se contabilicen como gastos de campaña, a pesar de que son recibos que fueron emitidos por una Coalición que únicamente participó en un Proceso Electoral, a pesar de que la temporalidad es en lapso de las campañas electorales y además, en este punto, si bien se declara fundado por la omisión de comprobar los gastos, se señala que es un acto culposo, en verdad, no puedo entender cómo puede ser un acto culposo el falsificar la firma de alguien, no creo que se pueda falsificar una firma sin querer, sin darse cuenta, es un acto que es doloso por naturaleza y me parece que

estos son elementos que no son congruentes de la Resolución que se pone a consideración de este Consejo General._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín._____

Si no hay mas intervenciones Secretario del Consejo, tome la votación correspondiente por favor._____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto Consejero Presidente._____

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en el orden del día como el apartado 10.2, tomando en consideración la fe de erratas circulada previamente._____

Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo, si son tan amables._____

8 votos._____

¿En contra?_____

2 votos._____

Aprobado por 8 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles; no estando presente durante la votación la Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas)._____

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG1300/2018) Ptos. 10.2_____

INE/CG1300/2018

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE LOS PARTIDOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, MOVIMIENTO CIUDADANO Y DEL TRABAJO, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE P-UFRPP 60/13

Ciudad de México, 12 de septiembre de dos mil dieciocho.

VISTO para resolver el expediente **P-UFRPP 60/13**, integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los Partidos Políticos Nacionales.

A N T E C E D E N T E S

I.Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. En sesión extraordinaria celebrada el veintiséis de septiembre de dos mil trece, el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral aprobó la Resolución **CG242/2013**, respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos Nacionales correspondientes al ejercicio dos mil doce, mediante la cual, entre otras cuestiones, se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del Partido de la Revolución Democrática, ello en atención a lo establecido en el Punto Resolutivo **DÉCIMO SEGUNDO**, Considerando **2.3**, inciso **a)**, conclusiones **87** y **88**. A continuación, se transcribe la parte que interesa: (Fojas 01-18 del expediente)

“a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias, mismas que tienen relación con el apartado de ingresos y egresos, las cuales se analizarán por temas.

**Egresos
(...)**

**REPAP (Promoción del Voto) de los Comités Ejecutivos Estatales
(...)**

Conclusión 87

'87. Se localizaron 702 (172 + 530) recibos "REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA" que carecen de la totalidad de los requisitos que señala la normatividad, específicamente la descripción de la actividad política realizada y tipo de campaña, por un importe de \$3,220,232.00 (\$1,032,000.00 + \$2,188,232.00)'.

Conclusión 88

'88. El partido no contabilizo el gasto por concepto de Reconocimientos por actividades políticas, por un importe de \$2,188,232.00, correspondiente a los Comités Ejecutivos Estatales de Baja California, Campeche, Chihuahua y Tabasco.'

**I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN EL
DICTAMEN CONSOLIDADO.**

(...)

Conclusiones 86, 87 y 88

De la verificación a la cuenta 'Servicios Personales', subcuenta 'Reconocimientos por Actividades Políticas (Promoción del voto)', se observaron registros de los cuales no se localizaron las pólizas, ni su respectiva documentación soporte. Los casos en comento se detallan en el Anexo 15 del Dictamen Consolidado (Anexo 1 de los oficios UF-DA/6400/13 y UF-DA/7138/13).

En consecuencia, mediante oficio UF-DA/6400/13 del 28 de junio de 2013, recibido por el partido el mismo día, se solicitó que presentara lo siguiente:

Las pólizas señaladas en el Anexo 15 del Dictamen Consolidado, con su respectivo soporte documental en original, consistente en recibos por reconocimientos por actividades políticas, con la totalidad de los datos, debidamente firmados, así como copia legible por ambos lados de la credencial para votar con fotografía de la persona a la que se le otorgó el reconocimiento.

En caso de que los comprobantes excedieran el tope de los 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, que en el año 2012 equivalían a \$6,233.00 (100 x \$62.33), presentara copia del cheque expedido a nombre del prestador del servicio, mismo que debía contener la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”, anexa a su respectiva póliza.

La relación anual nacional de las personas que recibieron reconocimientos por actividades políticas, en la que se especificara el monto total que percibió cada una de ellas y el total nacional durante el ejercicio correspondiente.

Las aclaraciones que a su derecho conviniera.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 209, 211, 213, 214, 218, 237, 239, 252, numeral 2, 254, 258, 259 y 266 del Reglamento de Fiscalización.

Al respecto, con escrito SAFyPI/593/13 del 12 de julio de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalización el mismo día, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

*‘(...)
El oficio que se contesta afirma que no fueron localizadas pólizas y la respectiva documentación soporte en la subcuenta “Reconocimientos por Actividades Políticas (Promoción del voto)”. La búsqueda practicada, arroja la documentación a que alude el oficio y que se proporciona a la autoridad en 17 carpetas identificadas como “UF-DA/6400, HONORARIOS ANEXO 1 ENTIDAD (consecutivo)”.
(...).’*

De lo manifestado y de la verificación a la documentación presentada por el partido, se determinó lo siguiente:

Por lo que corresponde a los Comités Ejecutivos Estatales de Nayarit y Tlaxcala señalados con (1) en la columna ‘Referencia’ del Anexo 15 del Dictamen Consolidado, el partido presentó las pólizas con su respectivo soporte documental consistente en recibos de reconocimientos por actividades políticas ‘REPAP-PRDCEN’, debidamente requisitados, por tal razón la observación se consideró atendida respecto de la comprobación del gasto.

Sin embargo, se identificó que el partido utilizó la serie de recibos correspondiente al Comité Ejecutivo Nacional, debiendo emitir recibos de la entidad federal que otorga dicho reconocimiento.

Por lo que respecta a los Comités Ejecutivos Estatales señalados con (2) en la columna 'Referencia' del Anexo 15 del Dictamen Consolidado, el partido presentó las pólizas con su respectivo soporte documental; sin embargo, de su verificación se observó que los recibos que soportaban dicho gasto correspondían a la serie 'REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA', fue preciso señalar que el registro inicial correspondía a transferencias a campaña federal, posteriormente realizó la reclasificación a la cuenta REPAP (Promoción del Voto), situación que resultó incorrecta, toda vez que al verificar las balanzas de comprobación correspondientes al Proceso Electoral Federal 2012, se observó que dichos Comités Ejecutivos Estatales reconocieron la transferencia en especie registrada inicialmente, por lo que dicho registro inicial, habría de revertirse al tratarse de gastos de campaña, por lo tanto, al reportar gastos que no correspondían a gastos ordinarios en dichas Entidades Federativas, la observación quedó no subsanada.

Respecto al Comité Ejecutivo Estatal de Jalisco referenciado con (3) en la columna "Referencia" del Anexo 15 del Dictamen Consolidado, el partido presentó las pólizas con su respectivo soporte documental consistente en recibos "REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA"; sin embargo, dichas erogaciones no fueron reportadas en el Proceso Electoral Federal 2012, toda vez que al verificar las balanzas de comprobación correspondientes no se localizó el registro de dicha transferencia en especie, asimismo, al verificar los auxiliares contables, se observó que canceló el registro inicial de la transferencia en especie a la campaña federal y realizó la reclasificación a la cuenta de honorarios asimilados a salarios, situación que resultó improcedente de acuerdo con el soporte documental de las pólizas, aunado a lo anterior, los recibos "REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA" presentados, no indican la campaña beneficiada, adicionalmente, no presentó las pólizas de ajuste por las reclasificaciones realizadas, por lo anteriormente expuesto, la observación quedó no subsanada.

Ahora bien, al no registrar los gastos antes referidos en la campañas federales, se solicitó al partido indicara las campañas beneficiadas, con la finalidad de aplicar en su caso, los porcentajes de prorrateo determinado por la otrora coalición Movimiento Progresista y acumular a los topes de gastos de campaña de aquellas campañas beneficiadas.

En relación a las pólizas de los Comités Ejecutivos Estatales señalados con (4) en la columna "Referencia" del Anexo 15 del Dictamen Consolidado, no fueron localizadas en la documentación presentada por el partido, por lo que la observación quedó no subsanada.

Finalmente, en relación con las pólizas de los Comités Ejecutivos Estatales identificadas con (5) en la columna "Referencia" del Anexo 15 del Dictamen

Consolidado, el partido efectuó la cancelación del registro inicial y reclasificó el gasto a la cuenta "Honorarios asimilados a salarios", asimismo presentó las pólizas con su respectivo soporte documental consistente en recibos de honorarios asimilados y contratos de prestación de servicios; por lo anterior, y respecto de la documentación presentada, la observación se consideró atendida; sin embargo, al verificar dichos contratos, se observó que no fueron signados al margen, tal y como se estableció en las cláusulas que lo integran, situación por lo que la observación quedó no subsanada.

En consecuencia, mediante oficio UF-DA/7138/13 del 19 de agosto de 2013, recibido por el partido el mismo día, se solicitó que presentara lo siguiente:

Respecto de los Comités Ejecutivos Estatales señalados con (2) en la columna "Referencia" del Anexo 15 del Dictamen Consolidado, revirtiera el registro contable inicial, de tal forma que los recibos de reconocimientos por actividades políticas se reflejara en la cuenta 5-53-534 "Transferencias a Campaña Federal", subcuenta 5-53-534-5341 "En especie".

Presentara las pólizas, auxiliares contables y balanzas de comprobación a último nivel, en los que se reflejaran dichas correcciones.

En relación con el Comité Ejecutivo Estatal señalado con (3) en la columna "Referencia" del Anexo 15 del Dictamen Consolidado, realizara nuevamente el registro contable, de tal forma que los recibos de reconocimientos por actividades políticas se reflejen en la cuenta 5-53-534 "Transferencias a Campaña Federal", subcuenta 5-53-534-5341 "En especie".

En razón a los Comités Ejecutivos Estatales indicados con (4) en la columna "Referencia" del Anexo 15 del Dictamen Consolidado, presentara las pólizas con la totalidad de su soporte documental en original.

En relación a los Comités Ejecutivos Estatales señalados con (4) en la columna "Referencia" del Anexo 15 del Dictamen Consolidado, en caso de que los comprobantes excedieran el tope de los 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, que en el año 2012 equivalían a \$6,233.00 (100 x \$62.33), presentara copia del cheque expedido a nombre del prestador del servicio, mismo que debía contener la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexa a su respectiva póliza.

Por lo que toca a los Comités Ejecutivos Estatales señalados con (5) en la columna "Referencia" Anexo 15 del Dictamen Consolidado, presentara los contratos de prestación de servicios celebrados entre el partido y los prestadores de servicios debidamente firmados y signados de acuerdo con las

cláusulas que lo integran, conteniendo la firma al margen en todas sus hojas útiles.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso h), 149, numeral 1, 153, 154, 273, numeral 1, inciso b), 312, numeral 1, inciso h) y 339 del Reglamento de Fiscalización.

Al respecto, con escrito SAFyPI/647/13 del 26 de agosto de 2013, recibido por la Unidad de Fiscalización el mismo día, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

'(...)

Al respecto, sírvase encontrar 5 carpetas intituladas UF-DA/7138/13, anexo 1, con pólizas y los recibos correspondientes, con las que se da cuenta de lo siguiente:

a) Respecto de los Comités Ejecutivos Estatales de Nuevo León y Zacatecas se revirtió el registro contable inicial, de tal forma que el registro de los recibos de reconocimientos por actividades políticas se ve reflejado en la cuenta 5-53-534 Transferencias a Campana Federal, subcuenta 5-53-534-5341 En especie. Al efecto, se presentan las pólizas que reflejan las correcciones indicadas por auditoría.

b) Se hizo lo propio respecto del Comité Ejecutivo Estatal de Jalisco; es decir, que se procedió a un nuevo registro contable, de tal forma que el registro de los recibos de reconocimientos por actividades políticas se ven reflejados en la cuenta 5-53-534 Transferencias a Campana Federal, subcuenta 5-53-534-5341 En especie.

c) En relación con los Comités Ejecutivos Estatales de Baja California, Campeche, Chihuahua, Oaxaca y Tabasco, se proporcionan las pólizas y documentación comprobatoria que, se dijo, no habían sido aportadas en el oficio de primera vuelta.

El oficio que se contesta requiere, asimismo, los contratos de prestación de servicios celebrados entre el partido y los prestadores de servicios en diversas entidades federativas. Se trata de documentos que ostentan la firma al calce, pero no se encuentran signados en cada una de sus fojas.

Es de insistir en que los compromisos de las partes que concurren a un contrato se contraen mediante la firma de cada una de ellas. La validez del documento requiere, entre otros elementos formales, de la suscripción o firma como expresión de la voluntad de los contratantes. Basta sin embargo que aparezca al calce del mismo. La firma al margen no es otra cosa que

una garantía para los contratantes de que cada una de las fojas del documento es exactamente la que consideraron durante la suscripción. Si así no fuera, son los contratantes y nadie mas quien puede objetar la autenticidad de la foja en cuestión, sin que necesariamente ello invalide el resto del documento.

Por añadidura, la revisión acuciosa del Reglamento de Fiscalización no permitió identificar disposición alguna en la que se indique que los contratos deberán estar signados en todas y cada una de sus fojas. El requisito reglamentario de la firma se encuentra debidamente atendido, cualesquier exigencia adicional no constituye sino un mero parecer de quien la plantea. (...).

Del análisis a lo manifestado, así como de la verificación a la documentación presentada, se determinó lo siguiente:

Por lo que respecta a los Comités Ejecutivos Estatales de Nuevo León y Zacatecas, señalados con (2) en la columna “Referencia” del Anexo 15 del Dictamen Consolidado, se determinó lo siguiente:

En relación al Comité Ejecutivo Estatal de Nuevo León, la respuesta del partido se consideró satisfactoria, toda vez que presentó las pólizas, auxiliares contables y balanza de comprobación a último nivel en donde se constató que realizó las modificaciones a su contabilidad, de tal forma que registró la transferencia realizada a la campaña federal, misma que reconoció el gasto por la transferencia recibida; razón por la cual, la observación quedó subsanada respecto de dicho Comité Estatal.

Respecto del Comité Ejecutivo Estatal de Zacatecas, el partido presentó las pólizas PD-0001/12-12 y PD-0002/12-12, mediante las cuales se identificó que realizó las correcciones solicitadas, reconociendo la transferencia a la campaña federal, misma que reconoció el gasto por la transferencia recibida; razón por la cual, la observación se consideró atendida respecto de la comprobación del gasto.

Sin embargo, de la verificación a los auxiliares contables así como de la balanza de comprobación, se observó que el partido duplicó el registro de la transferencia realizada a la campaña federal, por un importe de \$234,000.00, lo que derivó que la cuenta “REPAP (Promoción del voto) reflejara un saldo negativo al 31 de diciembre de 2012, por un importe de -\$234,000.00, por lo que el partido incumplió con lo establecido en el artículo 273, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, en relación con las Normas de Información Financiera NIF A-2 “Postulados Básicos, Consistencia” y NIF A-4 “Características Cualitativas de los Estados Financieros”.

Por lo que respecta al Comité Ejecutivo Estatal de Jalisco, señalado con (3) en la columna “Referencia” del Anexo 15 del Dictamen Consolidado, se determinó lo siguiente:

*De la verificación a las pólizas presentadas, así como de los auxiliares contables y balanza de comprobación, se observó que el partido realizó modificaciones a su contabilidad, reconociendo un gasto total por concepto de “REPAP (promoción del voto), por \$1,518,000.00, debiendo ser \$1,032,000.00, el cual fue amparado con 172 recibos de reconocimientos por actividades políticas correspondientes a la serie “REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA” que carecen de la descripción de la actividad política realizada y tipo de campaña, mismos que soportan el pago realizado por el Comité Ejecutivo Estatal de Jalisco. Los casos en comento se detallan en el **Anexo 16** del Dictamen Consolidado.*

Cabe señalar que la diferencia entre el monto registrado contra el soporte documental por \$486,000.00, corresponde a que el partido duplicó dicho importe en la cuenta “REPAP”, debiendo ser a la cuenta “Honorarios Asimilados a Salarios”.

No obstante lo anterior, de la verificación a las balanzas de comprobación correspondientes a la campaña federal 2012 de la otrora Coalición “Movimiento Progresista” del cual el partido fue integrante, no se localizó el registro de dichos recibos en la contabilidad que respalda los Informes de Campaña del Proceso Electoral Federal 2011-2012.

En consecuencia, al presentar 172 recibos “REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA” sin la totalidad de los requisitos que señala la normatividad, específicamente la descripción de la actividad política realizada y tipo de campaña, el partido incumplió con lo establecido en el artículo 252 del Reglamento de Fiscalización, en concordancia con el Primero Transitorio del Reglamento en comento, por un importe de \$1,032,000.00; razón por la cual, la observación quedó no subsanada respecto de dichos recibos.

Adicionalmente, al utilizar recibos “REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA”; estos corresponden a gastos de campaña federal, los cuales no fueron contabilizados en los Informes de Campaña 2012; sin embargo, considerando la falta de los requisitos del formato en los renglones “descripción actividad política realizada” y “tipo de campaña”; se propone el inicio de un procedimiento oficioso, con la finalidad de determinar las campañas beneficiadas con el gasto de los 172 recibos de reconocimientos por actividades políticas “REPAP” otorgados, por un total de \$1,032,000.00 para que en su caso, se acumulen para efectos del rebase de tope de gastos de campaña de

los entonces candidatos a cargos de elección por mayoría relativa de la otrora coalición “Movimiento Progresista”. Lo anterior, con fundamento en los artículos 77, numeral 6; 81, numeral 1, inciso c); 118, numeral 1, incisos h), w) y z); 344, numeral 1, inciso e) y 361 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

*Respecto de los Comités Ejecutivos Estatales señalados con (4) en la columna “Referencia” del **Anexo 15** del Dictamen Consolidado, se determinó lo siguiente:*

Por lo que corresponde de los Comités Ejecutivos Estatales de Baja California, Campeche, Chihuahua y Tabasco el partido presentó las pólizas observadas, así como su respectiva documentación soporte, consistente en 530 recibos “REPAPCOA-MOVIMIENTO PROGRESISTA”; razón por la cual, la observación se consideró atendida respecto de dicho punto.

Sin embargo, de la verificación a los recibos “REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA” presentados, se observó que carecen de la totalidad de datos establecidos en la normatividad, específicamente de los renglones de “descripción de la actividad política realizada”, así como “tipo de campaña”, por lo que el partido incumplió con lo establecido en el artículo 252 del Reglamento de Fiscalización, en concordancia con el Primero Transitorio del Reglamento en comento, por un total de \$2,188,232.00; razón por la cual, la observación quedó no subsanada respecto de 530 recibos. Los casos en comento se detallan en el Anexo 16 del Dictamen Consolidado.

Ahora bien, de la verificación a las balanzas de comprobación, así como de los auxiliares contables presentados por el partido, se observó que aun cuando proporcionó recibos “REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA”, no se localizó el registro contable del gasto en la cuenta “REPAP (Promoción del voto)”, por un importe de \$2,188,232.00, tal como se detalla a continuación:

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL	SALDO SEGÚN BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31-12-12 (ÚLTIMA VERSIÓN)	IMPORTE DE RECIBOS 'REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA' PRESENTADOS POR EL PARTIDO
Baja California	\$0.00	\$121,432.00
Campeche	\$0.00	\$180,000.00
Chihuahua	\$0.00	\$344,000.00
Tabasco	\$0.00	\$1,542,800.00
TOTAL	\$0.00	\$2,188,232.00

Cabe mencionar que el partido registró el importe de \$2,188,232.00 en la contabilidad de los Comités Ejecutivos Estatales en la cuenta 5-53-534-53-41 "Transferencias campaña federal", subcuenta "En especie"; sin embargo, de la verificación a las balanzas de comprobación correspondientes a la campaña federal 2012 de la otrora Coalición "Movimiento Progresista" del cual el partido fue integrante, no se localizó el registro de dicha transferencia en la contabilidad que respalda los Informes de Campaña del Proceso Electoral Federal 2011-2012.

En consecuencia, al no reconocer el gasto en los Comités Ejecutivos Estatales ni en la campaña federal, el monto de \$2,188,232.00, no se encuentra registrado en los informes presentados por el partido.

Adicionalmente, es preciso señalar que el partido realizó el pago de los recibos que amparan el monto observado, mediante la expedición de cheques de la cuenta bancaria de los Comités Estatales, por lo que se constató que los servicios amparados con dichos recibos fueron pagados.

En consecuencia, al no contabilizar el gasto por concepto de Reconocimientos por actividades políticas, por un importe de \$2,188,232.00, el partido incumplió con lo establecido en el artículo 273, numeral 1), inciso a) del Reglamento de Fiscalización.

*Adicionalmente, al utilizar recibos 'REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA'; estos corresponden a gastos de campaña federal, los cuales no fueron contabilizados en los Informes de Campaña 2012; sin embargo, considerando la falta de los requisitos del formato en los renglones 'descripción actividad política realizada' y 'tipo de campaña'; este Consejo General considera necesario el inicio de un procedimiento oficioso, con la finalidad de determinar las campañas beneficiadas con el gasto de los 530 recibos de reconocimientos por actividades políticas 'REPAP' otorgados, por un total de \$2,188,232.00 para que en su caso, se acumulen para efectos del rebase de tope de gastos de campaña de los entonces candidatos a cargos de elección por mayoría relativa de la otrora coalición 'Movimiento Progresista'. Lo anterior, con fundamento en los artículos 77, numeral 6; 81, numeral 1, inciso c); 118, numeral 1, incisos h), w) y z); 344, numeral 1, inciso e) y 361 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
(...)"*

II. Acuerdo de inicio. El ocho de octubre de dos mil trece, la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos (en adelante Unidad de Fiscalización) acordó integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de expediente, notificar al Secretario del Consejo de

su inicio; así como publicar el acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en los estrados de este Instituto. (Foja 19 del expediente)

III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento oficioso.

- a) El ocho de octubre de dos mil trece, la Unidad de Fiscalización fijó en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 20-21 del expediente).
- b) El once de octubre de dos mil trece, se retiraron del lugar que ocupan en el Instituto los estrados de la Unidad de Fiscalización, el acuerdo de inicio, la cédula de conocimiento; por lo que, mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 22 del expediente).

IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral. El ocho de octubre de dos mil trece, mediante oficio UF/DRN/8331/2013, la Unidad de Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General del Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 23 del expediente).

V. Notificación del inicio del procedimiento oficioso al Partido de la Revolución Democrática. El ocho de octubre de dos mil trece, mediante oficio UF/DRN/8337/2013, la Unidad de Fiscalización notificó al Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante este Consejo General del Instituto, el inicio del procedimiento oficioso de mérito. (Foja 24 del expediente).

VI. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría).¹

- a) El catorce de octubre de dos mil trece, mediante oficio UF/DRN/341/2013, la Dirección de Resoluciones y Normatividad (en adelante Dirección de Resoluciones) solicitó a la Dirección de Auditoría, remitiera toda la documentación soporte relacionada con la observación que originó el procedimiento administrativo sancionador en que se actúa. (Foja 26 del expediente).

¹ AL respecto, resulta importante precisar que atendiendo al volumen de la información existente en el expediente de mérito, las constancias del mismo atienden a un orden temático, para facilitar su concentración y estudio

- b) El veintidós de octubre de dos mil trece, mediante oficio UF-DA/233/13, la Dirección en comento dio contestación al oficio en comento, remitiendo copia simple de la documentación solicitada, consistente en nueve pólizas con quinientos treinta recibos “REPAP-COA MOVIMIENTO PROGRESISTA” correspondientes a los Comités Ejecutivos Estatales de Baja California, Campeche, Chihuahua y Tabasco por un importe de \$2,188,232.00. Adicionalmente, incluyó veinte pólizas con ciento setenta y dos recibos “REPAP-COA MOVIMIENTO PROGRESISTA” correspondientes al Comité Ejecutivo Estatal de Jalisco por un importe de \$1,032,000.00, mismos que indica formaron parte de la conclusión. (Fojas 27-28 del expediente).
- c) El doce de diciembre de dos mil trece mediante oficio UF/DRN/394/2013, la Dirección de Resoluciones solicitó a la Dirección de Auditoría, remitiera copia de las pólizas de cheque relacionadas con los recibos de reconocimientos por actividades políticas, y en su caso, señalara si la información fue corroborada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitiera la contestación y la documentación soporte. (Fojas 1623-1624 del expediente).
- d) Mediante oficios UF-DA/034/2014 y UF-DA/062/14, del veinticinco de febrero y tres de marzo, ambos de dos mil catorce, la Dirección de Auditoría dio contestación, aclarando que no hubo confirmación de cheques con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió copia de 52 cheques relacionados con el pago de recibos de reconocimientos por actividades políticas “REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA” y de ocho estados de cuenta. (Fojas 1625-1626, 1627-1628 del expediente).
- e) El veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/576/2016, la Dirección de Resoluciones solicitó a la Dirección de Auditoría, que precisara cual fue el destino real de los recursos contenidos en el cheque número 9720076 y realizará las aclaraciones pertinentes. (Fojas 1639-1640 del expediente).
- f) El uno de noviembre de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DA/1697/2016, la Dirección de Auditoría dio contestación al oficio en comento, en el que señala que la información que presentó el Partido de la Revolución Democrática en el marco de la revisión del Informe Anual 2012, es diferente a la presentada en el procedimiento oficioso, ya que un mismo cheque soportó más de una salida de recursos, aunado a que la información fue generada por dos sistemas contables distintos, esto es, Contafiscal 2000 y CONTPAQ. (Fojas 1641-1643 del expediente).

VII. Requerimiento de información a 702 ciudadanos en los estados de Baja California, Campeche, Chihuahua, Jalisco y Tabasco, que recibieron el Recibo de Reconocimiento por Actividades Políticas.

- a) Mediante veintinueve oficios, mismos que se detallan en la columna 23 (veintitrés), del **anexo 1** de la presente Resolución, la Unidad de Fiscalización solicitó a los Órganos Desconcentrados de este Instituto en los estados de Baja California, Campeche, Chihuahua, Jalisco y Tabasco, brindaran apoyo a efecto de notificar ochocientos setenta y tres oficios a los ciudadanos que presuntamente fueron beneficiados por los “Reconocimiento por Actividades Políticas en Campaña Federal”, con la finalidad de que confirmaran la suscripción del recibo, detallaran en qué consistió la actividad realizada, qué campaña beneficiaron y especificaran el monto y forma de pago de la operación. (Fojas 1656-1658; 1846-1848; 2009-2010; 2100-2101; 2169-2171; 2438-2439; 2544-2548; 3235-3237; 3891-3899; 4909-4916; 7226-7227; 8498-8499; 8579-8581; 8825-8827; 9161-9163; 9497-9498; 9499-9500; 9501-9503; 9626-9628; 9812-9813; 10041-10043; 10255-10257; 10679-10681; 10858-10859; 10880-10881; 11080-11081; 11099-11101 y 11176 del expediente)
- b) Mediante cuatro oficios, mismos que se detallan en la columna 23 (veintitrés) del **anexo 1**, la Unidad de Fiscalización solicitó a los Órganos Desconcentrados de este Instituto en los estados de Campeche, Chihuahua, Jalisco y Tabasco, realizaran la aplicación de doscientos noventa y cinco cuestionarios a ciudadanos que presuntamente se vieron beneficiados con los recibos, a efecto de que confirmaran haber suscrito los reconocimiento por actividades políticas en campaña federal, informaran en qué consistió la actividad realizada, qué campaña benefició y especificaran el monto y la forma de pago. (Fojas 2368-2370; 3020-3023; 7248-7258 y 11082-11086 del expediente).
- c) Mediante diez oficios, mismos que se detallan en la columna 23 (veintitrés) del **anexo 1**, se solicitó a los Órganos Desconcentrados de este Instituto en los estados de Aguascalientes, Distrito Federal, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Quintana Roo, se notificarán nueve oficios y/o cuestionarios a ciudadanos que fueron presuntamente beneficiados con los REPAP; sin embargo, de las diligencias realizadas se advirtió que ya no radicaban en la entidad señalada en el recibo. (Fojas 1850-1851; 1864-1865; 2011-2012; 3215-3216; 3405-3406; 8452-8453; 8457-8458; 8468-8469; 8479-8480 y 8559-8560 del expediente).

- d) Mediante 505 escritos sin número, mismos que se detallan en la columna 46 (cuarenta y seis) del **anexo 1**, los ciudadanos requeridos dieron respuesta a las solicitudes realizadas por la autoridad; y en su caso, formularon aclaraciones que consideraron pertinentes. (Fojas 1678; 1680-1681; 1755-1756; 1758-1759; 1761-1762; 1839; 1841; 1844; 1881; 1919-1924; 2007; 2196; 2201; 2216; 2222; 2228; 2326; 2347; 2353-2354; 2365-2366; 2378-2379; 2381-2386; 2387; 2391-2392; 2405-2406; 2410-2411; 2419-2420; 2426-2427; 2435-2435; 2470; 2480; 2495; 2529-2534; 2536-2537; 2539; 2541; 3012; 3038-3040; 3078-3080; 3091-3093; 3095-3097; 3102-3104; 3110-3112; 3124-3126; 3131-3133; 3138-3140; 3148-3150; 3154-3156; 3169-3171; 3174-3176; 3178-3180; 3183-3184; 3225; 3227; 3229; 3231; 3560-3564; 3672-3882; 4442; 4453; 4488; 4503; 4518; 4528; 4545; 4572; 4579; 4617; 4624; 4631; 4643; 4650; 4678; 4685; 4692; 4699; 4719; 4726; 4764; 4792; 4799; 4835; 4847; 4854; 4868; 4891; 4898; 4922; 4994; 5023; 5044; 5050; 5056; 5067; 5073; 5097; 5121-5122; 5146; 5196; 5277; 5290; 5304; 5310; 5321; 5343; 5351; 5357-5358; 5369; 5410; 5422; 5430; 5443; 5460; 5467; 5485; 5511; 5547; 5557; 5613; 5624; 5651; 5677; 5692; 5705; 5719; 5727; 5738; 5752; 5784; 5791; 5812; 5844; 5852; 5869; 5886; 5895-5896; 5915; 6121-6122; 6128-6129; 6515-6516; 6524; 6606; 6626; 6633; 6743; 6817; 6841-6842; 6854; 7144; 7165; 7220; 7221; 7240-7244; 7260-7261; 7265-7266; 7276-7277; 7281-7282; 7292-7293; 7303-7304; 7315-7316; 7326-7327; 7337-7338; 7350-7351; 7355-7356; 7360-7361; 7380-7381; 7385-7386; 7390-7391; 7395-7396; 7400-7401; 7405-7406; 7410-7411; 7418-7419; 7423-7424; 7431-7432; 7436-7437; 7441-7442; 7449-7450; 7453-7454; 7474-7475; 7478-7479; 7489-7490; 7500-7501; 7512-7513; 7517-7518; 7522-7523; 7533-7534; 7538-7539; 7541; 7562-7563; 7573-7574; 7580-7581; 7594-7595; 7599-7600; 7604-7605; 7609-7610; 7614-7615; 7619-7620; 7632-7633; 7637-7638; 7642-7643; 7646-7647; 7652-7653; 7657-7658; 7664-7665; 7669-7670; 7692-7693; 7703-7704; 7731-7732; 7734-7735; 7755-7756; 7765-7766; 7772-7773; 7779-7780; 7790-7791; 7797-7798; 7804-7805; 7811-7812; 7818-7819; 7825-7826; 7837-7838; 7844-7845; 7856-7857; 7863-7864; 7873-7874; 7880-7881; 7887-7888; 7894-7895; 7902-7903; 7908-7909; 7919-7920; 7927-7928; 7944-7945; 7951-7952; 7958-7959; 7982; 8011-8012; 8109-8110; 8115-8116; 8127-8127; 8136-8137; 8147-8148; 8201-8202; 8210-8211; 8258-8259; 8268-8269; 8276-8277; 8285-8286; 8294-8295; 8315-8316; 8324-8325; 8333-8334; 8342-8343; 8351-8352; 8630-8361; 8369-8370; 8378-8379; 8387-8388; 8396-8397; 8408-8409; 8417-8418; 8426-8427; 8438-8439; 8447-8448; 8551-8552; 8553; 8555-8556; 8685; 8715; 8776-8777; 8821; 9007; 9073; 9366; 9383; 9410; 9504-9526; 9549; 9555-9579; 9590; 9593; 9595; 9597; 9602; 9604; 9607; 9609; 9611; 9614; 9616; 9617; 9619; 9621; 9636; 9708; 9715; 9735; 9819; 9840; 9850; 9862; 9871; 9891; 9897; 9902; 9910; 9916; 9940; 9942; 9973; 9984; 9996; 9998; 10024; 10031; 10052; 10073; 10095;

10108; 10137-10139; 10146-10147; 10154-10156; 10164; 10170-10172; 10209; 10230; 10400; 10413; 10432bis; 10533; 10547; 10597bis; 10608; 10642; 10687; 10713; 10776; 10811; 10813; 10815; 10817-10834; 10839; 10842-10843; 10847-10849; 10870-10872; 10891-10892; 10896-10897; 10900-10901; 10902-10903; 10905-10906; 10908-10909; 10911-10912; 10914-10915; 10917-10918; 10920-10921; 10923-10924; 10926-10927; 10939-10940; 10942-10943; 10945-10946; 10948-10949; 10951-10952; 10954-10955; 10959-10960; 10967-10968; 10976-10977; 10982-10983; 10985-10986; 10988-10989; 10991-10992; 10994-10995; 10998-10999; 11000-11001; 11003-11004; 11006-11007; 11012-11013; 11019-11020; 11023-11024; 11027-11028; 11030; 11031; 11035; 11039; 11043; 11047; 11051; 11053-11054; 11087; 11089; 11093; 11169; 11183; 11237; 11264; 11266-11267; 11270; 11272; 11276; 11315-11316; 11328 y 11600 del expediente)

VIII. Ampliación de plazo para resolver.

- a) El cuatro de diciembre de dos mil trece, dada la naturaleza de las pruebas ofrecidas, la línea de investigación y las diligencias que deben realizarse para substanciar adecuadamente el procedimiento oficioso que por esta vía se resuelve, el Director General de la Unidad de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se amplió el plazo para presentar a este Consejo General el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 1654 del expediente).
- b) En esta misma fecha, mediante oficio UF/DRN/10134/2013, la Unidad de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el acuerdo referido en el inciso anterior. (Foja 1655 del expediente).

IX. Solicitud de información a la Dirección Jurídica del entonces Instituto Federal Electoral y ahora Instituto Nacional Electoral (en adelante Dirección Jurídica.

- a) Mediante diez oficios, la Unidad de Fiscalización solicitó a la Dirección Jurídica, informara el domicilio registrado en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores de 154 ciudadanos, mismos que se detallan en la columna 9 (nueve) del **anexo 1**. (Fojas 11601-11602; 11609-11610; 11615-11616; 11621-11622; 11639-11640; 11651-11652; 11668-11669; 11678-11679; 11682-11683 y 11687-11688 del expediente).
- b) Mediante diversos oficios, la Dirección de lo Contencioso de la Dirección Jurídica de este Instituto, atendió las solicitudes formuladas en el inciso que antecede,

mismos que se detallan en la columna 10 (diez) del **anexo 1**. (Fojas 11603-11608; 11611-11614; 11617-11620; 11623-11638; 11641-11650; 11653-11667; 11670-11677; 11680-11681; 11684-11686 y 11689-11726 del expediente).

- c) El doce de enero de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/0150/2016, la Unidad de Fiscalización, solicitó a la Dirección Jurídica informara el domicilio registrado en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores, de los siguientes ciudadanos: (Fojas 11727-11728 del expediente).

Ref.	Ciudadano	Ref.	Ciudadano
1	Adrián Salvador González Camarena	20	Luis Alberto Castro Niño
2	Alonso Eduardo Jiménez Vargas	21	Luis Gerardo Duran Moreno
3	Bernabé Arias Macías	22	María del Carmen Pérez López
4	Carlos Rafael Tapia Rolón	23	Maribel Centurión Vázquez
5	Carlos Santiago Santiago	24	Maricela Ocaña Gálvez
6	César Gutiérrez	25	Miguel Ángel Herrera Guzmán
7	Christian Carrillo Santana	26	Miguel Anguiano Martin
8	Eduardo Desiderio Yañez Torres	27	Omar Maximino Villaseñor David
9	Fernando Álvarez Jiménez	28	Osiel Sánchez Moya
10	Gabriel Enrique Méndez López	29	Pablo Armenta Castro
11	Guillermo Bracamontes del Toro	30	Rebeco Aguirre
12	Gustavo Tonatiuh Ledezma Caldera	31	Rosa Aida Ake Flores
13	Hugo Renán Panti Puc	32	Sergio Eloy de la Torre Mata
14	Jorge Arturo Villa Hernández	33	Vicente Montenegro Lara
15	José Antonio Macías González	34	Vicente Salvador Hernández
16	José Avalos Camacho	35	Víctor Manuel Páez Calvillo
17	José Carlos Dorantes Ramos	36	William Manuel Mena Flores
18	Linda Teodora González Rodríguez	37	Juan Carlos Dorantes Ramos
19	Lorena Rosario Juárez Villareal		

- d) El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, mediante oficio INE-DC/SC/1028/2016, la Dirección proporcionó la información localizada en el Integral de Información del Registro Federal de Electores. (Fojas 11729-11797 del expediente).
- e) El diecinueve de abril de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/233/2016, la Unidad de Fiscalización solicitó a la Dirección Jurídica, informara el domicilio registrado en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores, de los siguientes ciudadanos: (Fojas 11829-11830 del expediente).

**CONSEJO GENERAL
P-UFRPP 60/13**

Ref.	Ciudadano	Ref.	Ciudadano
1	Adrián Salvador González Camarena	10	Luis Gerardo Duran Moreno
2	Bernabé Arias Macías	11	María del Carmen Pérez López
3	Carlos Santiago Santiago	12	Miguel Ángel Herrera Guzmán
4	César Gutiérrez	13	Osiel Sánchez Moya
5	Fernando Álvarez Jiménez	14	Rebeco Aguirre
6	Jorge Arturo Villa Hernández	15	Vicente Salvador Hernández
7	José Antonio Macías González	16	Juan Carlos Dorantes Ramos
8	José Carlos Dorantes Ramos	17	Mariana Aguilera
9	Lorena Rosario Juárez Villareal	18	Diego E. Pérez Piñón

- f) El veintidós de abril de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/DC/SC/9800/2016, la Dirección proporcionó la información localizada en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores. (Fojas 11798-11828 del expediente).
- g) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/311/2016, la Unidad de Fiscalización solicitó a la Dirección Jurídica informara el domicilio registrado en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores, de los siguientes ciudadanos: (Fojas 11831-11832 del expediente).

Ref.	Ciudadano
1	Elizabeth Hernández García
2	Tomas Brito Lara
3	Lorena Méndez Denis
4	Rubén Darío Ligonio Morales
5	Marcos Rosendo Medina Filigrana
6	Antonio Sansores Sastre

- h) El veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/DC/SC/13467/2016, la Dirección Jurídica proporcionó la información localizada en el Integral de Información del Registro Federal de Electores. (Fojas 11833-11840 del expediente).

X. Solicitud de Información al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en adelante Servicio de Administración Tributaria).

- a) El uno de julio de dos mil catorce, mediante oficio INE/UTF/DRN/0923/2014, la Unidad de Fiscalización solicitó al Servicio de Administración Tributaria, informara los datos de ubicación o domicilio respecto de 83 ciudadanos, mismos que se señalan en la columna 11 (once) del **anexo 1**. (Fojas 11841-11844 del expediente).
- b) El treinta de septiembre de dos mil catorce, mediante oficio 103-05-2014-0685, el Servicio de Administración Tributaria, remitió la información respecto de los ciudadanos localizados en las bases de datos institucionales. (Fojas 11845-11873 del expediente).
- c) El ocho de diciembre de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/23653/2016, la Unidad de Fiscalización solicitó al Servicio de Administración Tributaria, informara el domicilio fiscal de los ciudadanos que se señalan en seguida: (Fojas 11874-11875 del expediente).

Ref.	Ciudadano
1	María del Carmen Pérez López
2	Rebeco Aguirre
3	Gabriel Enrique Méndez López
4	José Antonio Macías González
5	Juan Carlos Dorantes Ramos
6	Jorge Arturo Villa Hernández
7	Osiel Sánchez Moya
8	José Avalos Camacho
9	Bernabé Arias Macías

- d) El quince de diciembre de dos mil dieciséis, mediante oficio 103-05-2016-09995, el Servicio de Administración Tributaria remitió la información de los contribuyentes localizados en las bases de datos de dicha institución, precisando que no fueron encontrados algunos ciudadanos además de presentarse algunas homonimias. (Fojas 11876-11883 del expediente).

XI. Solicitud de Información a la Secretaria de Relaciones Exteriores.

- a) El dos de julio de dos mil catorce, mediante oficio INE/UTF/DRN/0921/2014, la Unidad de Fiscalización solicitó a la Dirección General de Delegaciones de la Secretaria de Relaciones Exteriores, los datos de ubicación o domicilio que tuviera registrado en el Sistema de datos de esa dependencia de 83 ciudadanos, mismos que se detallan en la columna 13 (trece) del **anexo 1**. (Fojas 11884-11887 del expediente).
- b) El cinco de septiembre de dos mil catorce, mediante oficio DGD 9739/14, la Dirección de Normatividad de la Secretaria de Relaciones Exteriores, atendió la solicitud remitiendo documentación de los ciudadanos que fueron localizados en el sistema de registros de pasaporte, señalando además que de diversos ciudadanos no se localizaron registros. (Fojas 11888-11915 del expediente).
- c) El once de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/3985/2017, la Unidad de Fiscalización solicitó a la Dirección General de Delegaciones de la Secretaria de Relaciones Exteriores, los datos de ubicación o domicilio de los ciudadanos que a continuación se señalan: (Fojas 11916-11917 del expediente).

Ref.	Ciudadano
1	María del Carmen Pérez López
2	Rebeco Aguirre
3	Gabriel Enrique Méndez López
4	José Antonio Macías González
5	Juan Carlos Dorantes Ramos
6	Jorge Arturo Villa Hernández
7	José Avalos Camacho
8	Bernabé Arias Macías
9	Fernando Álvarez Jiménez

- d) El veintiséis de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio DGD 6304/17, la Dirección de Normatividad de la Secretaria de Relaciones Exteriores, atendió la solicitud remitiendo documentación de los ciudadanos que fueron ubicados en el sistema de registros de pasaporte, respecto de los ciudadanos no localizados, se

requirió a esta autoridad la fecha de nacimiento de los mismos.² (Fojas 11918-11921 del expediente).

XII. Solicitud de Información al Instituto Mexicano del Seguro Social.

- a) El dos de julio de dos mil catorce, mediante oficio INE/UTF/DRN/0922/2014, la Unidad de Fiscalización solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social, los datos de ubicación o domicilio con lo que contara en el Sistema de esa Dependencia de 128 ciudadanos señalados en la columna 15 (quince) del **anexo 1**. (Fojas 11922-11925 del expediente).
- b) El veinticuatro de julio de dos mil catorce, mediante oficio 09 52 18 9223/3003, el Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que para atender la solicitud era necesario contar con la fecha y lugar de nacimiento o la Clave Única de Registro de Población (CURP), de los ciudadanos requeridos. (Foja 11926 del expediente).
- c) El veintiséis de enero de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/0617/2015, la Unidad de Fiscalización solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social, los datos de ubicación o domicilio de 128 ciudadanos señalados en la columna 15 (quince) del **anexo 1**. (Fojas 11927-11931 del expediente).
- d) El diecisiete de febrero de dos mil quince, mediante oficio 09 52 18 9223/728 el Instituto Mexicano del Seguro Social, remitió la información localizada en la Base de Datos de Derechohabientes del Instituto. (Fojas 11932-11940 del expediente).

XIII. Solicitud de Información a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del entonces Instituto Federal Electoral y ahora Instituto Nacional Electoral.

- a) El dieciocho de julio de dos mil catorce, mediante oficio INE/UTF/DRN/1110/2014, la Unidad de Fiscalización, solicitó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, informara si se encontraba registrada la defunción de los siguientes ciudadanos: (Fojas 11941-11942 del expediente).

² Al respecto, es importante señalar que toda vez que esta autoridad no contaba con la información requerida ni mayores elementos que aportar a la solicitud formulada inicialmente, no se formuló nuevamente el requerimiento.

Ref.	Ciudadano
1	Sebastián Martínez Ramírez
2	Luis Arturo Osorio Hernández
3	Sebastián Gómez Lázaro
4	Fabiola del Carmen González Castro
5	Jesús Orduñez Bejines

- b) El siete de agosto de dos mil catorce, mediante oficio INE/DERFE/536/2014, la Dirección Ejecutiva, confirmó el registro de la defunción de cuatro ciudadanos y encontró vigente el registro del C. Jesús Orduñez Bejines. (Fojas 11943-11944 del expediente).
- c) El nueve de julio de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/18612/2015, la Unidad de Fiscalización solicitó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, informara el domicilio de trece ciudadanos que se señalan en la columna 17 (diecisiete) del **anexo 1**. (Fojas 11945-11946 del expediente).
- d) El catorce de julio de dos mil quince, mediante oficio INE/DERFE/STN/11337/2015, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, proporcionó la información de los registros localizados en la base de datos del Padrón Electoral. (Fojas 11947-11949 del expediente).
- e) El veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/22593/2016, la Unidad de Fiscalización solicitó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, informara si se encontraba registrada la defunción del Ciudadano Jesús Orduñez Bejines. (Fojas 11950-11951 del expediente).
- f) El cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/DERFE/STN/22499/2016, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, informó que el registro fue dado de baja por defunción con fecha veintinueve de agosto de dos mil catorce. (Foja 11952 del expediente).

XIV. Solicitud de información al Registro Nacional de Población.

- a) El tres de marzo de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/2815/2015, la Unidad de Fiscalización, solicitó a la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, informara los datos de la CURP y ubicación

o domicilio de 74 ciudadanos que se señalan en la columna 19 (diecinueve) del **anexo 1**. (Fojas 11953-11955 del expediente).

- b) El nueve de marzo de dos mil quince, mediante oficio DIPE/410/346/2015, la Dirección de Investigación, Planeación y Evaluación, envió la información que arrojó la búsqueda en la Base de Datos Nacional de la Clave Única del Registro de Población, precisando que su sistema no cuenta con información del domicilio ni datos de localización de los ciudadanos. (Fojas 11956-11960 del expediente).
- c) El diecisiete de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/3986/2017, la Unidad de Fiscalización solicitó a la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, informara los datos de la CURP y ubicación o domicilio con el que contara en la base de datos de esa dependencia, de los siguientes ciudadanos: (Fojas 11961-11962 del expediente).

Ref.	Ciudadano
1	María del Carmen Pérez López
2	Rebeco Aguirre
3	Gabriel Enrique Méndez López
4	José Antonio Macías González
5	Juan Carlos Dorantes Ramos
6	Jorge Arturo Villa Hernández
7	José Avalos Camacho
8	Bernabé Arias Macías
9	Fernando Álvarez Jiménez

- d) El ocho de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio DRCUP/410/290/2017, la Dirección del Registro de Clave Única de Población, informó a la Unidad de Fiscalización que para determinar si algún registro existente en la base de datos pudiera corresponder a la identidad de alguno de los ciudadanos solicitados, era necesario contar con copia simple de documentos probatorios de identidad. (Foja 11963 del expediente).

XV. Solicitud de información a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular).

- a) El veinticinco de marzo de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/6033/15, la Unidad de Fiscalización solicitó a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, informara los datos de ubicación o domicilio con que contara en la base de datos de ese órgano desconcentrado, de 127 ciudadanos que se señalan en la columna 21 (veintiuno) del **anexo 1**. (Fojas 11965-11970 del expediente).
- b) El uno de abril de dos mil quince, mediante oficio CNPSS-DGAF-DGAN-406-2015, la Dirección General Adjunta de Normatividad, remitió la información solicitada. (Foja 11971-11976 del expediente).

XVI. Solicitud de información y documentación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

- a) Mediante diversos oficios la Unidad de Fiscalización, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitiera respecto de las cuentas números *****8822, *****0908, *****1039, *****1143 y *****1559, aperturadas a nombre del Partido de la Revolución Democrática, copia certificada por anverso y reverso de los cheques 7176722, 7176723 y 71767225, 9717733, 9717734, 9717738, 9717740, 9717744, 9717746, 9717758, 9717759, 9717769, 9717766, 9717761, 9717772, 9717736, 9717739, 9717742, 9717735, 9717737, 9717741, 9720080, 9720078, 9720079, 9720063, 9720077, 9720076, 9720073, 9720333, 9720334, 9720337, 9720335, 9720338, 9720339, 9720340, 9720341, 9720342, 9720343, 9720344, 9720345, 9720346, 9720347, 9720348, 9720349, 9720351, 9720356, 9720350, 9720336, 9720442, 9720444, 9720445 y 9720443, de los estados de cuenta correspondientes al periodo del uno de enero al treinta y no de diciembre de dos mil doce, e indicara las personas autorizadas durante el año dos mil doce para realizar movimientos en la misma, como se detalla a continuación: (Fojas 11983-12009 del expediente).

Oficio de solicitud CNBV	Fecha oficio de solicitud
INE/UTF/DRN/25037/2015	03/12/2015
INE/UTF/DRN/25038/2015	03/12/2015
INE/UTF/DRN/25039/2015	03/12/2015
INE/UTF/DRN/25040/2015	03/12/2015
INE/UTF/DRN/25041/2015	03/12/2015

- b) Al respecto, mediante diversos oficios la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio respuesta a la solicitud en comento, remitiendo la documentación solicitada como se detalla a continuación (Fojas 11982-11985; 11988-11991; 11994-11996; 11999-12002 y 12005-12007 del expediente).

Oficio de solicitud CNBV	Fecha oficio de respuesta	Oficio respuesta
INE/UTF/DRN/25037/2015	18/12/2015	214-4/501731/2015
INE/UTF/DRN/25038/2015	18/12/2015	214-4/501732/2015
INE/UTF/DRN/25039/2015	15/12/2015	214-4/501687/2015
INE/UTF/DRN/25040/2015	15/12/2015	214-4/501700/2015
INE/UTF/DRN/25041/2015	15/12/2015	214-4/501701/2015

XVII. Requerimiento de información a 37 ciudadanos en los estados de Baja California, Campeche, Chihuahua, Jalisco y Tabasco, que realizaron el cobro de cheques.

- a) Mediante diversos oficios la Unidad de Fiscalización, solicitó el auxilio de los Órganos desconcentrados del Instituto en los estados de Baja California, Campeche, Chihuahua, Jalisco y Tabasco, a efecto de que notificaran 33 oficios a los ciudadanos, que presuntamente cobraron los cheques con los que supuestamente se pagaron los “Reconocimientos por Actividades Políticas en Campaña Federal”, a fin de confirmar si éstos habían recibido y cobrado los cheques expedidos por el Partido de la Revolución Democrática, señalaran el concepto por el cual se les hizo entrega de esa cantidad, cual fue el destino de los recursos y aclararan si eran militantes, simpatizantes o laboraban para los Partidos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano o del Trabajo. (Fojas 2499-2500; 9463-9464; 11287-11289 y 11576-11581; 9495-9496; 11342; 11422-11424; 11452-11453; 11455-11456; 11462-11463; 11468-11469; 11477-11478; 11487; 11489-11490; 11495-11496; 11503-11505; 11515-11518; 11530-11531; 12303-12304; 12318; 12320; 12322; 12324-12325; 12476-12477; 12492-12493; 12494-12495; 12502-12503; 12509-12510; 12515-12516; 12523-12526; 12539-12540; 12582 del expediente).

Ref.	Entidad	Ciudadano	Número de oficio de solicitud de información
1	Baja California	C. Vicente Montenegro Lara	INE/UTF/DRN/4170/2016
2	Baja California	C. Pablo Armenta Castro	INE/UTF/DRN/4171/2016
3	Baja California	C. Luis Alberto Castro Niño	INE/UTF/DRN/4172/2016
4	Baja California	C. Carlos Rafael Tapia Rolon	INE/UTF/DRN/4173/2016

**CONSEJO GENERAL
P-UFRPP 60/13**

Ref.	Entidad	Ciudadano	Número de oficio de solicitud de información
5	Campeche	C. William Manuel Mena Flores	INE/UTF/DRN/5658/2016
6	Campeche	C. Rosa Aida Ake Flores	INE/UTF/DRN/5659/2016
7	Campeche	C. María del Carmen Pérez López	No se localizó domicilio
8	Campeche	C. Maribel Centurión Vázquez	INE/UTF/DRN/5660/2016
9	Campeche	C. Hugo Renán Panti Puc	INE/UTF/DRN/5661/2016
10	Chihuahua	C. Lorena Rosario Juárez Villarreal	INE/UTF/DRN/11267/2016
11	Chihuahua	C. Rebeco Aguirre	No se localizó domicilio
12	Chihuahua	C. César Gutiérrez	INE/UTF/DRN/11268/2016
13	Chihuahua	C. Diego E. Pérez Piñón	INE/UTF/DRN/11269/2016
14	Jalisco	C. Gabriel Enrique Méndez López	INE/UTF/DRN/11272/2016
15	Jalisco	C. Víctor Manuel Páez Calvillo	INE/UTF/DRN/11273/2016
16	Jalisco	C. Eduardo Desiderio Yáñez Torres	INE/UTF/DRN/11274/2016
17	Jalisco	C. José Antonio Macías González	No se localizó domicilio
18	Jalisco	C. Juan Carlos Dorantes Ramos	No se localizó domicilio
19	Jalisco	C. Miguel Ángel Herrera Guzmán	INE/UTF/DRN/11275/2016
20	Jalisco	C. Miguel Anguiano Martín	INE/UTF/DRN/11276/2016
21	Jalisco	C. Alonso Eduardo Jiménez Vargas	INE/UTF/DRN/11277/2016
22	Jalisco	C. Jorge Arturo Villa Hernández	INE/UTF/DRN/11278/2016
23	Jalisco	C. Christian Carrillo Santana	INE/UTF/DRN/11279/2016
24	Jalisco	C. Adrián Salvador González Camarena	INE/UTF/DRN/11280/2016
25	Jalisco	C. Osiel Sánchez Moya	INE/UTF/DRN/11281/2016
26	Jalisco	C. Gustavo Tonatiuh Ledezma Caldera	INE/UTF/DRN/11282/2016
27	Jalisco	C. José Avalos Camacho	INE/UTF/DRN/11283/2016
28	Jalisco	C. Vicente Salvador Hernández	INE/UTF/DRN/11284/2016
29	Jalisco	C. Linda Teodora González Rodríguez	INE/UTF/DRN/11285/2016
30	Jalisco	C. Bernabe Arias Macías	INE/JAL/JLE/VS/0015/2017
31	Jalisco	C. Luis Gerardo Duran Moreno	INE/UTF/DRN/11286/2016
32	Jalisco	C. Guillermo Bracamontes Del Toro	INE/UTF/DRN/11287/2016
33	Jalisco	C. Fernando Álvarez Jiménez	INE/UTF/DRN/11288/2016
34	Jalisco	C. Omar Maximino Villaseñor David	INE/UTF/DRN/11289/2016
35	Tabasco	C. Maricela Ocaña Gálvez	INE/UTF/DRN/11291/2016
36	Tabasco	C. Carlos Santiago Santiago	INE/UTF/DRN/11292/2016

- b) Mediante escritos sin número, veintiún de los ciudadanos enlistados, dieron respuesta al requerimiento formulado por la Unidad de Fiscalización, como se detalla en el **anexo 2**, mismos que se enlistan a continuación: (Fojas 2141-2145; 2158; 2164, 2520-2521; 2523; 2525; 2527del expediente).

Ref.	Entidad	Ciudadano	Ref.	Entidad	Ciudadano
1	Baja California	C. Pablo Armenta Castro	12	Jalisco	C. Alonso Eduardo Jiménez Vargas

Ref.	Entidad	Ciudadano	Ref.	Entidad	Ciudadano
2	Baja California	C. Luis Alberto Castro Niño	13	Jalisco	C. Christian Carrillo Santana
3	Baja California	C. Carlos Rafael Tapia Rolón	14	Jalisco	C. Adrián Salvador González Camarena
4	Campeche	C. William Manuel Mena Flores	15	Jalisco	C. Gustavo Tonatíuh Ledezma Caldera
5	Campeche	C. Rosa Aida Ake Flores	16	Jalisco	C. Vicente Salvador Hernández
6	Campeche	C. Maribel Centurión Vázquez	17	Jalisco	C. Linda Teodora González Rodríguez
7	Campeche	C. Hugo Renán Panti Puc	18	Jalisco	C. Luis Gerardo Duran Moreno
8	Jalisco	C. Sergio Eloy De La Torre Mata	19	Jalisco	C. Omar Maximino Villaseñor David
9	Jalisco	C. Víctor Manuel Páez Calvillo	20	Tabasco	C. Maricela Ocaña Gálvez
10	Jalisco	C. Miguel Ángel Herrera Guzmán	21	Tabasco	C. Carlos Santiago Santiago
11	Jalisco	C. Miguel Anguiano Martín			

XVIII. Requerimiento de información y documentación al Partido de la Revolución Democrática.

- a) El veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/16863/2016, la Unidad de Fiscalización requirió al representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante este Consejo General, a efecto de que confirmara haber expedido los cheques aludidos en párrafos precedentes, en favor de los ciudadanos referenciados en los cuadros que anteceden, señalara el concepto por el cual hizo entrega de las cantidades, detallara cuál fue el servicio prestado y/o actividades realizadas e indicara cuál fue el destino de los recursos. (Fojas 12288-12290 del expediente).
- b) En relación a lo anterior, resulta pertinente señalar que el instituto político no presentó escrito de respuesta en el término concedido por la Unidad de Fiscalización.
- c) El veintiséis de julio de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/17633/2016, la Unidad de Fiscalización, nuevamente requirió al representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante este Consejo General, a efecto de que atendiera el requerimiento señalado en el inciso a). (Fojas 12291-12294 del expediente).
- d) El ocho de agosto de dos mil dieciséis, mediante oficio PGA-473/2016, el Partido de la Revolución Democrática, remitió el oficio SF/426/2016, emitido por el C. Manuel Cifuentes Vargas, Secretario de Finanzas del Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual proporciona la información solicitada aclarando

que las cuentas señaladas en el oficio, se trata de cuentas donde se les deposita la prerrogativa del CEN al CEE de índole nacional, operación ordinaria. (Fojas 12295 del expediente).

- e) El uno de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/21987/2018, la Unidad de Fiscalización, solicitó al representante propietario del Partido ante el Consejo General del Instituto, informara cual fue la campaña beneficiada respecto de cada uno de los recibos de reconocimientos por actividades políticas en campaña federal materia del procedimiento. (Fojas 12667 y 12668 del expediente).
- f) El siete de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio CEMM-192/2018, el representante del partido, remitió la información solicitada señalando que los beneficiarios fueron algunos de los candidatos a Senadores en las entidades correspondientes. (Fojas 12669-12728 del expediente).

XIX. Requerimiento de información y documentación al Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Baja California.

- a) El diecinueve de junio de dos mil diecisiete, mediante oficio INTE/UTF/DRN/10319/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Comité Ejecutivo Estatal del estado de Baja California, informara cuál fue el destino de los recursos consignados en los cheques expedidos por el Partido a diversos ciudadanos, lo anterior, toda vez que las personas refirieron que los títulos de crédito les fueron expedidos y/o endosados únicamente para su cobro y posteriormente el recurso fue entregado al Comité Directivo Estatal. (Fojas 12552-12557 del expediente).
- b) El tres de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio 027/23-06/MXL/2017, el Presidente del Partido en el Estado de Baja California, señaló que la información y documentación soporte fue enviada al Comité Ejecutivo Nacional. (Foja 12559 Bis del expediente).
- c) El tres de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio 028/23-06/MXL/2017 y en alcance al oficio 027/23-06/MXL/2017, el Presidente del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Baja California, remitió un medio magnético con documentación para acreditar su dicho. (Foja 12559 del expediente).

XX. Requerimiento de información y documentación al Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Campeche.

- a) El veintitrés de junio de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/10321/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Campeche, informara cuál fue el destino de los recursos consignados en los cheques expedidos por el Partido a diversos ciudadanos, lo anterior, toda vez que las personas refirieron que los títulos de crédito les fueron expedidos y/o endosados únicamente para su cobro y posteriormente el recurso fue entregado al Comité Directivo Estatal. (Foja 12569-12571 del expediente).
- b) El veintiuno de julio de dos mil diecisiete, mediante escrito suscrito a título personal, el C. William Manuel Mena Flores³, atendió el oficio señalado en el inciso que antecede, en el que informó que los expedientes de los cheques señalados en la solicitud, no se encuentran en poder de ese Comité, pudiéndose acceder a ellos en las oficinas centrales del Comité Ejecutivo Nacional. (Foja 12582 del expediente).

XXI. Requerimiento de información y documentación al Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Jalisco.

- a) El diecinueve de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/11679/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Jalisco, informara cuál fue el destino de los recursos consignados en los cheques expedidos por el Partido a diversos ciudadanos, lo anterior, toda vez que las personas refirieron que los títulos de crédito les fueron expedidos y/o endosados únicamente para su cobro y posteriormente el recurso fue entregado al Comité Directivo Estatal. (Fojas 12587-12594 del expediente).
- b) El quince de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio sin número, el Secretario de Administración y Finanzas en representación del Comité Ejecutivo Estatal del Partido, atendió el oficio señalado en el inciso que precede, señalando que los recursos referidos, no fueron ingresados a cuentas de ese Comité, ni fueron entregados a quienes fungían como dirigentes del Comité en el año 2012, por lo que se desconoce su destino. (Foja 12596-12599 del expediente).

³ El ciudadano en comento, fue requerido en su calidad de Representante del Partido de la Revolución Democrática en la entidad de referencia.

XXII. Requerimiento de información y documentación al Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Chihuahua.

- a) El veintidós de agosto dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/11680/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Chihuahua, informara cuál fue el destino de los recursos consignados en los cheques expedidos por el Partido a diversos ciudadanos, lo anterior, toda vez que las personas refirieron que los títulos de crédito les fueron expedidos y/o endosados únicamente para su cobro y posteriormente el recurso fue entregado al Comité Directivo Estatal. (Fojas 12838-12839 del expediente).
- b) El treinta de agosto de dos mil diecisiete, mediante escrito suscrito a título personal, el C. Jesús Manuel Márquez Sotelo, atendió el oficio señalado en el inciso que antecede, en el que manifiesta que ya no es Presidente Estatal del Partido y que los cheques referidos fueron utilizados para el pago de estructura electoral y de promoción al voto, que el informe y comprobación se entregó al Comité Ejecutivo Nacional, precisando que respecto del cheque 9720076, fue utilizado para el pago de la prestación de “vacaciones” de la C. Lorena Rosario Juárez Villarreal y otros gastos pequeños. (Foja 12624 del expediente).

XXIII. Requerimiento de información y documentación al Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Tabasco.

- a) El dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/12349/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Tabasco, informara cuál fue el destino de los recursos consignados en los cheques expedidos por el Partido a diversos ciudadanos, lo anterior, toda vez que las personas refirieron que los títulos de crédito les fueron expedidos y/o endosados únicamente para su cobro y posteriormente el recurso fue entregado al Comité Directivo Estatal. (Fojas 12658-12659 del expediente).
- b) El veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio sin número, el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, atendió la solicitud y manifestó que los recursos citados fueron entregados a los candidatos para apoyo a las personas que fueron acreditadas como representantes de casilla y representantes generales, en la Jornada Electoral del seis de junio de dos mil doce. (Foja 12610 del expediente).

XXIV. Acuerdo de Ampliación de la Litis. El siete de noviembre de dos mil diecisiete, la Unidad de Fiscalización, acordó ampliar el objeto de la investigación, toda vez que del análisis de las constancias que integran el procedimiento oficioso se advirtió que los hechos se encontraban vinculados con los Partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano. (Foja 12734 del expediente).

XXV. Notificación de ampliación de litis e inicio del procedimiento oficioso a Movimiento Ciudadano.

- a) El diez de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/15546/2017, la Unidad de Fiscalización notificó al representante propietario de Movimiento Ciudadano ante este Consejo General del Instituto, la ampliación de la litis y el inicio del procedimiento oficioso de mérito. (Foja 12735 del expediente).
- b) El veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/19927/2017, la Unidad de Fiscalización, le comunicó al representante propietario del Partido, la ampliación del objeto de la investigación a efecto de que dicho partido formara parte del procedimiento oficioso. (Foja 12736 del expediente).

XXVI. Notificación de ampliación de litis e inicio del procedimiento oficioso al Partido del Trabajo.

- a) El diez de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/15547/2017, la Unidad de Fiscalización notificó al representante propietario del Partido del Trabajo ante este Consejo General del Instituto, la ampliación de la litis y el inicio del procedimiento oficioso de mérito. (Foja 12803 del expediente).
- b) El veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/19928/2017, la Unidad de Fiscalización, le comunicó al representante propietario del Partido, la ampliación del objeto de la investigación a efecto de que dicho partido formara parte del procedimiento oficioso. (Foja 12804 del expediente).

XXVII. Requerimiento de documentación e información a la Representación de Movimiento Ciudadano, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

- a) El uno de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/21988/2018, la Unidad de Fiscalización solicitó al representante propietario de Movimiento Ciudadano, ante este Consejo General, informara cual fue la campaña beneficiada respecto de cada uno de los recibos de reconocimientos por actividades políticas en campaña federal materia del procedimiento. (Fojas 12737 y 12738 del expediente).
- b) El seis de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio MC-INE-099/2018, el representante propietario del partido informó que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos contables de Movimiento Ciudadano no encontraron documentales o indicio alguno sobre la información solicitada. (Fojas 12739-12740 del expediente).
- c) El nueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio MC-INE-105/2015, en alcance al oficio MC-INE-099/2018, el representante propietario de Movimiento Ciudadano informó que el Partido de la Revolución Democrática remitió a esa representación copia simple del oficio de respuesta al requerimiento, en el que señala la campaña beneficiada, de los recibos de reconocimientos por actividades políticas. (Fojas 12741-12801 del expediente).

XXVIII. Requerimiento de documentación e información a la Representación del Partido del Trabajo, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

- a) El uno de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/21989/2018, la Unidad de Fiscalización, solicitó al representante propietario del Partido del Trabajo ante este Consejo General del Instituto, informara cual fue la campaña beneficiada respecto de cada uno de los recibos de reconocimientos por actividades políticas en campaña federal materia del procedimiento. (Fojas 12805 y 12806 del expediente).
- b) El cinco de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio REP-PT-INE-PVG-038/2018, el representante propietario del Partido atendió la solicitud y señaló que derivado del Convenio de Coalición entre los partidos políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, denominada "Movimiento Progresista" el responsable de la administración y reporte de gastos

era el Partido de la Revolución Democrática, por lo que no se cuenta con la información requerida. (Foja 12807 del expediente).

XXIX. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral.

- a) El veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/21183/2018, la Unidad de Fiscalización solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, informara si los 702 ciudadanos, formaban parte del Padrón de Militantes y Simpatizantes registrados en el año 2012, de los partidos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo. (Foja 12282 y 12283 del expediente).
- b) El veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0702/2018, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, dio respuesta remitiendo la información solicitada. (Foja 12284-12286 del expediente).

XXX. Emplazamiento al Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

- a) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/31944/2018, la Unidad de Fiscalización, emplazó al representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante este Consejo General de este Instituto, para que en un plazo improrrogable de cinco días hábiles manifestara por escrito lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas que estimara procedentes. (Fojas 12808-12810 del expediente).
- b) El seis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio sin número el C. Camerino Eleazar Márquez Madrid, en su carácter de representante propietario del Partido, dio respuesta al oficio señalado en el inciso que antecede, el cual en términos de los que establece el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su parte conducente, se transcribe a continuación: (Fojas 12811-12927 del expediente).

“(...) Se niega categórica y expresamente que el partido de la Revolución Democrática, haya incurrido en violación a lo establecido en los artículos 342,

numeral 1, inciso f) y 344, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

Previo al fondo del presente asunto, es pertinente establecer que el emplazamiento efectuado al Partido de la Revolución Democrática, mediante alfanumérico INE/UTF/DRN/31944/2018, a todas luces es violatorio de toda norma procesal, en virtud de que de manera subjetiva, abstracta y genérica se indica que ‘existen elementos en grado suficiente dentro del procedimiento para concluir que 325 recibos beneficiaron a diversos candidatos y estos serán acumulados para efectos del rebase de topes de gastos de campaña de los entonces candidatos a cargos de elección popular por mayoría relativa de la otrora coalición “Movimiento Progresista”, y por lo que hace al importe de \$1,734,700.00 (un millón setecientos treinta y cuatro mil setecientos pesos 00/MN), éste no fue debidamente comprobado, toda vez que no se acreditó de manera fehaciente su aplicación y destino’

Imputación de esa Unidad Técnica de Fiscalización, que a todas luces es subjetiva, abstracta y genérica, por lo que viola flagrantemente las reglas generales del debido proceso consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior en virtud de que, esa autoridad fiscalizadora, deja de indicar cuales son los supuestos 325 REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA que a su consideración van a ser considerados para efectos de rebase de topes de campaña, así mismo, deja de indicar mediante un razonamiento jurídico en el que se invoquen las razones de hecho y de derecho que lo motivan a concluir que el importe de \$1,734,700.00 no fue debidamente comprobado, toda vez que no se acreditó de manera fehaciente su aplicación y destino, premisas procedimentales que al no considerarse en el emplazamiento que se contesta, significan una grave afectación al debido proceso, pues deja en pleno estado de indefensión al instituto político que se representa, al obstaculizar la adecuada defensa de los intereses del Partido de la Revolución Democrática, al no existir acusaciones específicas, que se encuentren ubicadas en modo, tiempo, lugar y circunstancias, con las cuales se pueda pronunciar mi representado.

En este orden de ideas, por lo que respecta a la subjetiva, abstracta y genérica acusación vertida en contra del Partido de la Revolución Democrática, se niega en todos sus términos el haber incurrido en violación a lo establecido en los artículos 342, numeral 1, inciso f) y 344, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; pues, mediante oficio marcado con el número SF-200/2018, suscrito por el C. Manuel Cifuentes Vargas, Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, relativo a la contestación al requerimiento efectuado por esta Unidad Técnica de Fiscalización mediante alfanumérico

INE/UTF/DRN/21987/2018, en que le se solicita se indique cual fue la campaña beneficiada respecto de los recibos de reconocimientos por actividades políticas en campaña federal, materia del presente procedimiento sancionador; de manera puntual y específica se indicó la campaña beneficiada, siendo ésta la que se aprecia en el siguiente concentrado:

(...)

Bajo estas circunstancias, al existir en autos del expediente y en los archivos de esa Unidad Técnica de Fiscalización los formatos REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA relativos a los recibos de reconocimientos por actividades políticas en campaña federal, materia del presente procedimiento sancionador, así como el señalamiento de las campañas beneficiadas, atendiendo a las reglas generales de la valoración de las pruebas, la experiencia y la sana crítica, contrario a la imputación que es objeto el Partido de la Revolución Democrática, es dable arribar a la conclusión de que se encuentra debidamente acreditado el origen y destino de los recursos investigados en el asunto que nos ocupa, por tanto debe ser declarado como infundado el presente procedimiento sancionador en materia de fiscalización.

En este orden de ideas, es pertinente manifestar que los importes que se describen en el concentrado indicado con anterioridad, al sumarlos a los gastos de las campañas y candidaturas beneficiadas que en el mismo se indica, de ninguna manera se incurre en un rebase de topes de gastos de campaña que presume esa Unidad Técnica de Fiscalización. (...)"

XXXI. Emplazamiento al Representante Propietario del Partido del Trabajo, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

- a) El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/32560/2018, la Unidad de Fiscalización, emplazó al representante propietario del Partido del Trabajo ante este Consejo General de este Instituto, para que en un plazo improrrogable de cinco días hábiles manifestara por escrito lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas que estimara procedentes. (Fojas 12928-12930 del expediente).
- b) El trece de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio REP-PT-INE-PVG-188/2018, el C. Pedro Vázquez González, en su carácter de representante propietario del Partido, dio respuesta al oficio señalado en el inciso que antecede, el cual en términos de los que establece el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su parte conducente, se transcribe a continuación: (Fojas 12945-12946 del expediente).

“(…)

1) *Si bien los partidos políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano fuimos coaligados mediante coalición total en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, en el respectivo convenio se estableció en la Cláusula Séptima, inciso c), lo siguiente:*

SÉPTIMA. - Que de conformidad con lo que se establece en el artículo 98, numeral 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los partidos políticos coaligados convienen en aportar en efectivo la totalidad de los recursos que reciban por concepto de gastos de campaña, de conformidad con lo siguiente:

*c) Para la administración y reporte de los gastos de campaña en los informes correspondiente, las partes acuerdan constituir un Consejo de Administración que estará integrado por un representante designado por cada uno de los partidos coaligados, **el designado por el Partido de la Revolución Democrática será el responsable del órgano de finanzas de la coalición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 161, párrafo 1, inciso b) del Reglamento de Fiscalización del Instituto Federal Electoral.***

2) Es en razón de lo anterior que el instituto político que represento, no cuenta con la información soporte del caso que nos ocupa.

“(…)”

XXXII. Emplazamiento al Representante Propietario de Movimiento Ciudadano, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

- a) El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/32561/2018, la Unidad de Fiscalización, emplazó al representante propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General de este Instituto, para que en un plazo improrrogable de cinco días hábiles manifestara por escrito lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas que estimara procedentes. (Fojas 12931-12933 del expediente).
- b) El doce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio MC-INE-361/2018, el C. Juan Miguel Castro Rendón, en su carácter de representante de Movimiento Ciudadano, dio respuesta al oficio señalado en el inciso que antecede, el cual en términos de los que establece el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su parte conducente, se transcribe a continuación: (Fojas 12934-12944 del expediente).

“(…) Que de conformidad con lo que se establece en los artículos 25, 26, 27, 35 y demás relativo del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y en atención a su oficio identificado con la clave alfanumérica INE/UTF/DRN/32561/2018, recibido en la oficina que ocupa la Representación de Movimiento Ciudadano el siete de junio de la presente anualidad, emitido dentro del expediente que al rubro se indica, por medio del cual se solicita que en un término de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha en que se reciba el oficio, conteste por escrito lo que considere pertinente, exponga lo que a su derecho convenga, así como para que ofrezca y exhiba las pruebas que respaldan sus afirmaciones.

Del oficio antes señalado se desprende que nos encontramos en un asunto que se arrojó de la revisión de los informes anuales de ingresos y egresos de los Partidos Políticos Nacionales, en cuanto al Partido de la Revolución Democrática.

Lo anterior por los recibos denominados como ‘REPAP -COA- MOVIMIENTO PROGRESISTA’, al considerar que con relación a los 377 recibos, éstos fueron desconocidos por los presuntos beneficiarios que cobraron los cheques con los que supuestamente se dispersaron los recursos señalados, con un importe de \$1,734,700.00.

Del análisis de las constancias que obran en el expediente, podemos determinar que como es del conocimiento de esa autoridad que de conformidad con lo establecido en el convenio de coalición realizado por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, el responsable de realizar la administración de los recursos de la campaña fue el Partido de la Revolución Democrática.

Por lo que una vez que se revisaron las constancias y de conformidad con los argumentos vertidos por la representación del Partido de la Revolución Democrática, existen suficientes elementos para poder negar categórica y expresamente que Movimiento Ciudadano, haya incurrido en violación a lo establecido en los artículos 342, numeral 1, inciso f) y 344, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

Previo al fondo del presente asunto, es pertinente establecer que el emplazamiento efectuado a Movimiento Ciudadano mediante alfanumérico INE/UTF/DRN/32561 /2018, a todas luces es violatorio de toda norma procesal, en virtud de que de manera subjetiva, abstracta y genérica se indica que ‘...existen elementos en grado suficiente dentro el procedimiento para concluir que 325 recibos beneficiaron a diversos candidatos y estos serán acumulados

para efectos del rebase de topes de gastos de campaña de los entonces candidatos a cargos de elección popular por mayoría relativa de la otrora coalición "Movimiento Progresista", y por lo que hace al importe de \$1,734,700.00 (un millón setecientos treinta y cuatro mil setecientos pesos 00/MN), éste no fue debida mente comprobado, toda vez que no se acreditó de manera fehaciente su aplicación y destino ...'

Imputación de esa Unidad Técnica de Fiscalización, que a todas luces es subjetiva, abstracta y genérica, por lo que viola flagrantemente las reglas generales del debido proceso consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior en virtud de que, esa autoridad fiscalizadora, deja de indicar cuales son los supuestos 325 REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA que a su consideración van a ser considerados para efectos de rebase de topes de gastos de campaña, así mismo, deja de indicar mediante un razonamiento jurídico en el que se invoquen las razones de hecho y de derecho que lo motivan a concluir que el importe de \$1,734,700.00 no fue debidamente comprobado, toda vez que no se acreditó de manera fehaciente su aplicación y destino, premisas procedimentales que al no considerarse en el emplazamiento que se contesta, significan una grave afectación al debido proceso, pues deja en pleno estado de indefensión al instituto político que se representa, al obstaculizar la adecuada defensa de los intereses de mi representado, al no existir acusaciones específicas, que se encuentren ubicadas en modo, tiempo, lugar y circunstancias, con las cuales podamos realizar las pronunciamos pertinentes y en consecuencia contar con una adecuada defensa.

En este orden de ideas, por lo que respecta a la subjetiva, abstracta y genérica acusación vertida en contra de los partidos que conformamos la coalición Movimiento Progresista, se niega en todos sus términos el haber incurrido en violación a lo establecido en los artículos 342, numeral 1, inciso f) y 344, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; pues, mediante oficio marcado con el número SF-200/2018, suscrito por el C. Manuel Cifuentes Vargas, Secretario de Fianzas del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, relativo a la contestación al requerimiento efectuado por esa Unidad Técnica de Fiscalización mediante el alfanumérico INE/UTF/DRN/21987/2018, en el que se solicita se indique cual fue la campaña beneficiada respecto de los recibos de reconocimientos por actividades políticas en campaña federal, materia del presente procedimiento sancionador; de manera puntual y específica se indicó la campaña beneficiada.

Por lo tanto, esa autoridad cuenta con los elementos suficientes para poder determinar cuáles fueron las campañas beneficiadas, lo cual esa autoridad fiscalizadora puede desprender de forma clara de la contestación emitida por el

Partido de la Revolución Democrática, en el escrito presentado ante esa Unidad Técnica de Fiscalización, para desahogar el emplazamiento realizado por esa autoridad en el expediente que nos ocupa el día seis de junio de la presente anualidad, ante la ventanilla de la oficialía de partes de esa dirección, por lo que para evitar repeticiones innecesarias nos adherimos al concentrado que se encuentra expresado de forma clara y contundente de las hojas 3 a la 129.

Bajo estas circunstancias, al existir en autos del expediente y en los archivos de esa Unidad Técnica de Fiscalización los formatos REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA relativos a los recibos de reconocimientos por actividades políticas en campaña federal, materia del presente procedimiento sancionador, así como el señalamiento de las campañas beneficiadas, atendiendo a las reglas generales de la valoración de las pruebas, la experiencia y la sana crítica, contrario a la imputación que es objeto el Partido de la Revolución Democrática, es dable arribar a la conclusión de que se encuentra debidamente acreditado el origen y destino de los recursos investigados en el asunto que nos ocupa, por tanto debe ser declarado como infundado el presente procedimiento sancionador en materia de fiscalización.

En este orden de ideas, es pertinente manifestar que los importes que se describen en el concentrado indicado con anterioridad, al sumarlos a los gastos de las campañas y candidaturas beneficiadas que en el mismo se indica, de ninguna manera se incurre en un rebase de topes de gastos de campaña que presume esa Unidad Técnica de Fiscalización.

Por lo que consideramos ilegal e ilegítimo que se pretenda encuadrar una conducta ilícita en contra de mi representado por hechos que no se encuentran debidamente probados y que sustente la Denuncia y/o Querella interpuesta en nuestra contra, máxime cuando nos encontramos claramente ante un derecho constitucional del libre ejercicio de la profesión de periodismo.

Con ello, a su vez, se violentan los principios jurídicos ius puniendi y tempus regit actum que rigen la materia penal y que son de aplicabilidad para todo régimen sancionador en materia electoral, lo que deben atenderse cuando se pretende restringir, limitar, suspender o privar de cierto derecho a algún sujeto. Cabe hacer notar que el actor pretende que realice esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), en cuanto a la integración del Procedimiento Sancionador en Materia de Fiscalización que nos ocupan, no cumple lo que los aforismos jurídicos invocan, y que por lo tanto encierran una consecuente trasgresión a los principios Constitucionales de legalidad y de certeza con los que debe actuar la autoridad electoral.

Es pretender condenar de una posible conducta a través de la integración de un Procedimiento Sancionador en Materia de Fiscalización, sin que el tipo

jurídico que se nos pretende imputar encuadre a la Denuncia y/o Querella interpuesta en nuestra contra. Lo que se genera en perjuicio de una Institución Política como lo es MOVIMIENTO CIUDADANO, violaciones a los principios rectores del derecho que invoca y que son los de ius puniendi y tempus regit actum, para un mejor proveer, cito la siguiente Tesis Jurisprudencial:

*‘RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL
PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES. – (...)’
(...)*

MOVIMIENTO CIUDADANO siempre ha conducido sus actividades dentro de los cauces legales, actuando de buena fe y ajustando mi conducta y la de sus precandidatos y candidatos a los postulados de la Ley, por lo que negamos rotundamente, los señalamientos imputados en su contra

Resultan aplicables la Jurisprudencia dictada por Tribunales Colegiados de Circuito y la Tesis Relevante del TEPJF, cuyo rubro y contenido son del tenor siguiente:

*‘DUDA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO
REO. - (...)’
(...)*

De conformidad con las argumentaciones vertidas, el Procedimiento Sancionador en Materia de Fiscalización que nos ocupa resulta contrario a los interés jurídico de mis representados, razón por la cual dentro del plazo concedido, acudimos a desvirtuarlas, por lo que de acuerdo con lo expresado, como premisa fundamental en este asunto, MOVIMIENTO CIUDADANO, niega los posibles hechos aludidos en el Procedimiento Sancionador en Materia de Fiscalización que se controvierte, siendo motivo suficiente para salvaguardar sus derechos ante posibles responsabilidades o sanciones derivadas del presente Procedimiento Sancionador.

Cabe precisar que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece como requisito procesal, la expresión de los agravios que el acto o resolución causen al actor, vinculándolos con los preceptos presuntamente violados, lo que supone, en una interpretación sistemática de las normas procedimentales aplicables, una vinculación lógica de hipótesis normativas y la ubicación del acto impugnado en las mismas, en el caso, no se aporta hecho alguno que demuestre violación alguna, ya que es de explorado derecho, que dicho requisito debe considerarse que se acredita, cuando se hacen valer agravios debidamente configurados, esto es, que se precisen claramente los argumentos o razonamientos enderezados a acreditar la afectación del interés jurídico del promovente, derivado de la vulneración de

determinada norma jurídica, lo contrario, vulnera los principios de constitucionalidad y legalidad en materia electoral, tutelados en los artículos 14, 16, 19 y 20 apartado B de nuestra Constitución General de la República, en relación con los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad que deben prevalecer en el ejercicio de la función electoral, establecidos en el inciso b) de la fracción IV del artículo 116 Constitucional. (...)

XXXIII. Acuerdo de Alegatos.

- a) El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la investigación y notificar a las partes involucradas para que en un plazo de setenta y dos horas manifestara por escrito los alegatos que consideraran convenientes. (Foja 12947 del expediente)
- b) El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/35337/2018, se notificó al Partido del Trabajo, a efecto de que en un plazo de setenta y dos horas formulara sus alegatos (Fojas 12948-12949) del expediente)
- c) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio REP-PT-INE-PVG-246/2018, signado por el C. Pedro Vázquez González, representante propietario del Partido del Trabajo, formuló sus alegatos. (Fojas 12981-12982 del expediente)
- d) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/35339/2018, se notificó al Partido de la Revolución Democrática, a efecto de que en un plazo de setenta y dos horas formulara sus alegatos (Fojas 12958-12951 del expediente)
- e) El uno de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, signado por el C. Camerino Eleazar Márquez Madrid, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, formuló sus alegatos. (Fojas 12952-12978 del expediente)
- f) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/35338/2018, se notificó Movimiento Ciudadano, a efecto de que en un plazo de setenta y dos horas formulara sus alegatos (Fojas 12979-12980 del expediente)
- g) El cuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio MC-INE-469/2018, signado por el C. Juan Miguel Castro Rendón, representante propietario de

Movimiento Ciudadano, formuló sus alegatos. (Fojas 12983-12987 del expediente)

XXXIV. Cierre de Instrucción. El veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 12987 del expediente).

XXXV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado en lo general en la vigésima primera sesión extraordinaria de fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por unanimidad de votos a favor de las Consejeras Electorales Dra. Adriana Favela Herrera y Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles, y de los Consejeros Electorales Dr. Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero Presidente de la Comisión el Dr. Ciro Murayama Rendón y en lo particular con tres votos a favor y uno voto en contra de la Consejera Electoral Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles.

C O N S I D E R A N D O

1. Competencia. Para establecer la competencia de las autoridades electorales, es necesario tener en cuenta que el diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral. Asimismo, el veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la Ley General de Partidos Políticos.

En dicho Decreto, el legislador federal estableció expresamente en el artículo sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral tendrá 180 días contados a partir de la entrada en vigor de la ley, para expedir los Reglamentos respectivos y que, mientras tanto:

*“Las disposiciones generales emitidas por el Instituto Federal Electoral o por el Instituto Nacional Electoral, con antelación a la entrada en vigor del presente Decreto **seguirán vigentes**, en lo que no se opongan a la Constitución y la presente Ley, hasta en tanto el Consejo General del Instituto Nacional Electoral no emita aquéllas que deban sustituirlas.”*

Así las cosas, con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g); así como tercero y sexto transitorios, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Unidad Técnica de Fiscalización **es competente** para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General.

En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.

2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que con motivo de la publicación llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General sesión extraordinaria celebrada el cinco de enero de dos mil dieciocho y sesión ordinaria celebrada el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, Acuerdos INE/CG04/2018⁴ e INE/CG614/2017⁵, respectivamente, resulta indispensable determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable.

⁴ Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG409/2017, en cumplimiento a lo ordenado en el SUP-RAP-623/2017.

⁵ Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG264/2014, modificado a su vez con los acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016.

Al respecto, el artículo TERCERO transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece de manera expresa que:

“Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su inicio. Lo anterior, sin perjuicio de que se apliquen en lo conducente los plazos previstos en los artículos transitorios del presente Decreto.”

En este sentido, por lo que hace a la **normatividad sustantiva** tendrá que estarse a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron las conductas denunciadas por los sujetos obligados, esto es, a lo dispuesto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente al veintitrés de mayo de dos mil catorce, así como al Acuerdo **CG201/2011**, aprobado en sesión extraordinaria celebrada el cuatro de julio de dos mil once, mediante el cual se expidió el Reglamento de Fiscalización y se abrogaron diversos Reglamentos.

Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis relevante **Tesis XLV/2002**, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “**DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL**” y el principio tempus regit actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes vigentes en la época de su realización.

Ahora bien, por lo que hace a la **normatividad adjetiva o procesal** conviene señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, precedentes relevantes, identificada con el rubro: “**RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL**”, no existe retroactividad en las normas procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados con éstas, se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan por la norma vigente al momento de su ejecución. Por tanto, en la sustanciación y resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobado mediante el Acuerdo **INE/CG614/2017**.

3. Determinación de sanciones. El veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; en ese sentido, la determinación del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización corresponde al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo precedente establece *“A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.”*

En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de Medida y Actualización; por lo que, en la presente Resolución en el supuesto que se actualice la imposición de una sanción económica en días de salario al sujeto obligado, se aplicará la Unidad de Medida y Actualización.

En sesión pública celebrada el primero de septiembre de dos mil dieciséis, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por unanimidad de votos la tesis que se cita a continuación:

Tesis LXXVII/2016

MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA.- *En los artículos 26 y 41, Base V, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; segundo, tercero y quinto transitorio del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se establece que corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos respecto de los Procesos Electorales Federales y locales; que la nueva Unidad de Medida y Actualización sustituiría la medición en base al salario mínimo, así como la obligación de todas las autoridades nacionales y estatales de adecuar sus disposiciones jurídicas para ese efecto, por lo que todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. En ese sentido, el cálculo y determinación del monto de las multas que se impongan por infracciones a las disposiciones en materia electoral deben realizarse de acuerdo al valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de imponerlas.*

Quinta Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-84/2016.—Actor: Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Guanajuato.— Autoridad responsable: Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.—30 de marzo de 2016.—Unanimidad de votos.— Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Mauricio Elpidio Montes de Oca Durán.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-182/2016 y acumulados.—Promoventes: Partido Revolucionario Institucional y otros.—Autoridad responsable: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas.—22 de junio de 2016.— Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: Jorge Alberto Medellín Pino, Ramiro Ignacio López Muñoz y Juan Guillermo Casillas Guevara.

No obstante lo anterior, al resolver el recurso de apelación con la clave alfanumérica SUP-RAP-759/2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó el criterio con respecto al valor de la Unidad de Medida impuesto como sanción debe ser el vigente al momento de la comisión de la infracción, y no el que tiene esa Unidad de Medida al momento de emitirse la resolución sancionadora, en razón de que, de esa manera se otorga una mayor seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, pues se parte de un valor predeterminado precisamente por la época de comisión del ilícito, y no del que podría variar según la fecha en que se resolviera el procedimiento sancionador correspondiente, en atención a razones de diversa índole, como pudieran ser inflacionarias.

En consecuencia, determinó en la misma resolución, dejar sin efectos jurídicos la tesis relevante del rubro **MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA.**

4. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el sobreseimiento de los procedimientos acumulados que nos ocupan, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada.

En este sentido, las causales referidas son inatendibles en el caso que nos ocupa, como se demuestra a continuación.

A. Reglas generales. Criterios definidos por la Sala Superior en procedimientos sancionadores distintos a la materia de fiscalización respecto a la extinción de la potestad sancionadora.

Al analizar diversos temas relacionados con procedimientos sancionadores (ordinarios, especiales así como los previstos en normativas de partidos políticos), la Sala Superior ha determinado en reiteradas ocasiones, que en el sistema jurídico nacional se reconocen distintas figuras jurídicas relativas a la **extinción de derechos** que consisten generalmente en facultades, potestades o poderes (como las relativa al inicio del procedimiento sancionador; la determinación de la responsabilidad y la imposición de las sanciones correspondientes a las conductas infractoras) la cual requiere para su ejercicio válido la realización de los actos encaminados a la creación, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas, referentes normalmente a cuestiones de orden público e interés social, que necesitan de certeza y seguridad jurídica, de modo que cuando no se realizan dichos actos, se agota la potestad y se pierde la posibilidad legal de castigar las infracciones.

La definición y operatividad de la figura jurídica de la caducidad para determinar la extinción de las potestades y atribuciones de las autoridades o de los órganos partidarios para determinar la responsabilidad y, en su caso, las sanciones aplicables a los probables responsables de las conductas infractoras se ha sostenido en diversas ejecutorias, entre las que resulta pertinente destacar **SUPJDC-480/2004, SUP-JDC-488/2004, SUP-JDC-155/2005, SUP-JDC-662/2005, SUP-JDC-942/2007 y SUP-JDC-1107/2007, SUP-JDC-329/2008 y acumulado, SUP-RAP-525/2011 y acumulados, SUP-RAP-614/2017 y acumulados, SUPRAP-737/2017 y acumulados y SUP-RAP-729/2017 y acumulados**, así como en la jurisprudencia 8/2013 de rubro: *CADUCIDAD. OPERA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR*.

Lo que se resalta de las ejecutorias mencionadas es la conclusión de que la **caducidad** de las atribuciones de las autoridades u órganos partidarios investigadores, persecutores y sancionadores de los ilícitos, por el sólo transcurso del tiempo, o de la **prescripción**, como un medio para liberarse de obligaciones, **representan una garantía contra las actuaciones indebidas por parte de los órganos sancionadores**, susceptibles de mantener al individuo en incertidumbre

bajo la amenaza del ejercicio de una facultad punitiva y de constituir un obstáculo al pleno ejercicio de los derechos fundamentales.

La Sala Superior también ha sostenido, que la necesidad de dichas instituciones es un imperativo constitucional y, por tanto, cuando la normativa electoral o partidaria **no establece plazo alguno para la extinción de esta potestad**, a fin de erradicar un estado de incertidumbre contrario al orden constitucional, tal vacío normativo **debe cubrirse o subsanarse** a través de los principios básicos del propio ordenamiento jurídico, a través de las diversas técnicas ofrecidas por el derecho, susceptibles de aplicación tratándose de instituciones procesales, tales como la **analogía, la interpretación conforme o acudir a los principios generales del derecho**, en términos de lo previsto en el artículo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque a la luz de los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica, la **posibilidad jurídica de sancionar las conductas infractoras debe estar sujeta a un determinado plazo de extinción** y, por consecuencia, de las sanciones que puedan imponerse.

Lo anterior, porque en el sistema jurídico nacional se reconoce la figura jurídica de la extinción de las potestades para sancionar las conductas infractoras, justificada generalmente como mecanismo o instrumento relativo a la mutación de las relaciones jurídicas por virtud del transcurso del tiempo, en combinación con la pasividad de los sujetos jurídicos, que puede aplicarse respecto de las personas o de las autoridades, referirse a derechos sustantivos y procesales, e igualmente a facultades, potestades o derechos potestativos.

Como se advierte de las síntesis de criterios de la Sala Superior, la utilización de la figura jurídica extintiva explica y justifica la **pérdida de las facultades sancionadoras de un ente**, porque se trata de un mecanismo aplicado tanto para generar la pérdida de potestades y también para determinar la pérdida de derechos sustantivos o procesales.

Más allá de la denominación que se haya otorgado a la institución jurídica procesal generadora de la extinción, lo relevante es que para la Sala Superior el ejercicio de la facultad para iniciar el procedimiento, o bien para determinar la responsabilidad y sancionar a quienes resulten responsables de las conductas infractoras, no puede ser indefinido ni perene, porque ello atenta contra el principio de legalidad, base de la garantía de los derechos de certeza, seguridad jurídica y de acceso a la jurisdicción de la ciudadanía. Derechos que tienen su sustento en las garantías constitucionales tuteladas en los artículos 14, 16, 17 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La extinción de la potestad sancionadora.

La extinción de la potestad sancionadora en un plazo determinado va alineada con el conocimiento de las personas de la posibilidad materialmente definida de ser sometidos al procedimiento respectivo, a efecto de poder determinar su responsabilidad respecto de los hechos infractores, con la certeza y seguridad jurídica de que podrán verse compelidas a responder por su proceder y soportar las consecuencias legales; pero al mismo tiempo, conocen el límite de que tal facultad no es perpetua, sino que está acotada a un tiempo determinado, pues solo así las personas tendrán certeza y seguridad jurídica, al saber que no podrán ser afectadas o restringidas en sus derechos por el reproche de conductas realizadas con mucha antelación y respecto de las cuales no fueron denunciadas o acusadas o no se realizaron los actos positivos necesarios para sujetarlas oportunamente al procedimiento respectivo, con lo cual se evita la indefinición de las situaciones jurídicas que pudieran afectar sus intereses legítimos, lo mismo que la arbitrariedad o parcialidad de los entes con potestades sancionadoras y al mismo tiempo se contribuye al eficaz ejercicio de las atribuciones de dichos entes.

La extinción de la potestad sancionadora debe analizarse desde dos vertientes:

- a) La primera, a la luz del plazo requerido para generar la **prescripción de la falta y,**
- b) La segunda, el plazo para **determinar la responsabilidad y, en su caso, sancionar la falta.**

En principio, **ambos plazos deben estar establecidos en una norma;** sin embargo, cuando en la normativa no se recoge expresamente la prescripción de las faltas, ni el plazo para determinar la responsabilidad y, en su caso, para sancionar las faltas, tal omisión en modo alguno implica, que no pueda reconocerse la extinción de la facultad, más bien implica que el órgano con facultades punitivas queda constreñido a reconocer la extinción y determinar, mediante la valoración que realice del tiempo de inactividad entre la falta y el inicio del procedimiento sancionador correspondiente, o bien, entre el inicio del procedimiento y la resolución que le recaiga en la cual se determine la responsabilidad y, en su caso, la sanción de la falta, el plazo requerido para ese efecto sobre la base de parámetros razonables.

La determinación del plazo razonable de la extinción mencionada se justifica con base en la aplicación de los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica que tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De lo contrario, es decir, de no determinar un plazo razonablemente idóneo y suficiente para ese efecto, además de la vulneración de tales principios, trastocaría la garantía constitucional prevista en el artículo 17 de la Ley Fundamental, que reconoce a las personas el derecho a la tutela estatal efectiva, en plazos breves, conforme a referentes que sean **racionales, objetivos y proporcionales** al fin pretendido con su previsión.⁶

C. Condiciones que interrumpen los plazos de la extinción de la potestad sancionadora.

En el sistema jurídico nacional y, en particular en el sistema electoral, las distintas figuras jurídicas extintivas que se reconocen (como la caducidad, la prescripción, la preclusión, la pérdida de la instancia, etcétera) establecen lapsos distintos y, en algunos casos, se omite la previsión de ellos; sin embargo, la temporalidad o duración para que opere la extinción en cualquiera de las vertientes señaladas responde, entre otras, a las condiciones siguientes:

- Que los titulares de los poderes, potestades o derechos se encuentren en la posibilidad real y material de ejercerlos, sin que existan situaciones ajenas que se lo impidan;
- La necesidad de fomentar, respecto de las autoridades, el ejercicio eficiente de las atribuciones, y en cuanto a los demás entes o sujetos titulares de derechos o facultados para formular denuncias o quejas, el oportuno ejercicio de esos poderes; por último,

⁶ Al respecto debe tenerse presente lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia, con relación a que la garantía de acceso a la impartición de justicia prevista en el artículo 17 de la ley fundamental comprende, distintos derechos a favor de los gobernados, uno de ellos, el de justicia pronta consistente en la obligación de los tribunales de resolver las controversias dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Al mismo tiempo, en dicho criterio jurídico se precisó que esta obligación es exigible no sólo a los tribunales, sino también a cualquier autoridad que realiza actos materialmente jurisdiccionales, es decir, de aquellos entes que en el ámbito de su competencia tienen la atribución para dirimir un conflicto y ejerzan funciones materialmente jurisdiccionales. La jurisprudencia de mérito se identifica como 2ª./J. 192/2007, localizable en la página 209 del Tomo XXVI, octubre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro dice: "**ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.**"

- La necesidad de garantizar la seguridad jurídica, así como la certeza de la esfera de derechos de las personas, al impedir que las situaciones que pudieran afectarlas se mantengan latentes de manera indefinida.

Lo anterior se encuentra plenamente aceptado por la Sala Superior en las jurisprudencias 11/2013 y 14/2013, así como en la tesis XII/2017, cuyos rubros y textos dicen:

Jurisprudencia 11/2013

“CADUCIDAD. EXCEPCIÓN AL PLAZO EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.- De la interpretación sistemática de los artículos 1º, párrafo tercero, 14, 16, 17, 41, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 14, apartado 3, inciso c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8, apartado 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 361, párrafo 2 y 367 a 371 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de la jurisprudencia sustentada de rubro CADUCIDAD. OPERA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, se advierte que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia dentro de un plazo razonable; que el procedimiento especial sancionador es de carácter sumario y que es criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que la potestad sancionadora, por regla general, debe caducar en el plazo de un año, por ser el tiempo razonable y suficiente para tramitarlo y emitir la resolución correspondiente. En ese contexto, el plazo establecido como regla general para la caducidad de la facultad sancionadora en el procedimiento especial, puede, por excepción, ampliarse cuando la autoridad administrativa acredite una causa justificada, razonable y apreciable objetivamente, en la que exponga las circunstancias, de facto o de iure, de las que se advierta que la dilación en la resolución se debe, entre otras, a la conducta procedimental del probable infractor, o bien, a que su desahogo, por su complejidad, requirió de la práctica de diversas diligencias o actos procedimentales, que razonablemente no fue posible realizar dentro de ese plazo; sin que dicha excepción pueda derivar de la inactividad de la autoridad.

Jurisprudencia 14/2013

CADUCIDAD. SUSPENSIÓN DEL PLAZO EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.- De la interpretación sistemática y

funcional de los artículos 1º, párrafo tercero, 14, 16, 17, 41, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 14, apartado 3, inciso c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8, apartado 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 361, párrafo 2 y 367 a 371 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de la jurisprudencia de rubro CADUCIDAD. OPERA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, se advierte que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia dentro de un plazo razonable; que el procedimiento especial sancionador es de carácter sumario y que la potestad sancionadora, por regla general, debe caducar en el plazo de un año, por ser el tiempo razonable y suficiente para tramitarlo y emitir la resolución correspondiente. En ese contexto, el cómputo del plazo para que opere la caducidad de la facultad sancionadora, debe estimarse suspendido desde el momento en que se interponga algún medio de impugnación contra la resolución que se emita en el procedimiento respectivo, hasta la notificación de la sentencia correspondiente, debido a que dentro de ese lapso la autoridad administrativa no está en posibilidad de ejercer su facultad sancionadora.

Tesis XII/2017

CADUCIDAD. TÉRMINO DE DOS AÑOS Y SUS EXCEPCIONES EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y del 464 al 469, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que, en aras de tutelar los derechos fundamentales de certeza y seguridad jurídica, en el procedimiento ordinario sancionador, la caducidad de la potestad sancionadora de la autoridad administrativa opera, una vez iniciado el procedimiento, al término de dos años, contados a partir de que la autoridad competente tenga conocimiento de la denuncia respectiva o de los hechos probablemente constitutivos de infracción, lo cual resulta razonable atendiendo a las especificidades del procedimiento y la complejidad en cada una de sus etapas. No obstante, dicho plazo puede ser modificado excepcionalmente cuando: a) la autoridad administrativa electoral exponga y evidencie que las circunstancias particulares de cada caso hacen necesario realizar diligencias o requerimientos que por su complejidad ameritan un retardo en su desahogo, siempre y cuando la

dilación no derive de la inactividad de la autoridad; y b) exista un acto intraprocesal derivado de la presentación de un medio de impugnación.

Como se aprecia, está reconocida la existencia de condiciones citadas como elementos que pueden interrumpir el plazo de para la extinción de la potestad sancionadora, siempre que dichas condiciones se encuentren justificadas de manera razonable y objetiva, para lo cual, impone al órgano con potestades sancionadoras la carga de exponer las circunstancias de hecho o de derecho que justifiquen dicha interrupción.

D. Plazo para determinar el inicio del procedimiento sancionador.

Por regla general, la normativa es la que determina el plazo de prescripción de las faltas administrativas, así como el plazo para que el ente con potestades sancionadoras determine la responsabilidad y, en su caso, la sanción o sanciones correspondientes.

Se distingue la potestad para que el órgano investido de atribuciones para sancionar conductas infractoras inicie, de oficio, el procedimiento, del derecho de las personas a denunciar la comisión de las faltas para que el infractor sea sancionado, si el procedimiento debe seguirse mediante denuncia, queja o petición previa.

Cualquiera de esas formas que se prevea en la normativa, tiene como efecto obligar a los órganos autorizados para iniciar el procedimiento y legitimar a las personas en lo general, a presentar las denuncias e iniciar los procedimientos sancionadores, **a partir de que se ha cometido la falta**, permitiendo a la autoridad desarrollar las actividades necesarias para ejercer su atribución con eficiencia, porque entraña el deber de actuar inmediatamente conforme a sus funciones y el reconocimiento del derecho a denunciar las conductas que se consideren contrarias a la normativa, mismo que podrán deducir al denunciar o formular su queja en contra de quienes considere responsables, a partir de que se realiza la conducta infractora.

Sin embargo, cuando no se tiene conocimiento de la conducta infractora por parte de los órganos con potestades punitivas o de las personas con derecho a denunciar o formular queja en forma coetánea a su comisión, entonces se prevé un tiempo razonable y suficiente para que se inicie de oficio o se formule la queja o denuncia **a partir de la fecha en que se tiene conocimiento de la falta**, de suerte que garantice el ejercicio eficaz de las atribuciones de los órganos con potestades sancionadores para averiguar las faltas y a las personas el derecho de formular la queja **cuando se enteren de la conducta irregular, sin que el plazo pueda**

extenderse al previsto para la prescripción de la falta, porque ello atentaría contra los principios de certeza y seguridad jurídica de presuntos responsables.

E. Plazo para determinar la responsabilidad y, en su caso, imponer la sanción.

Este plazo responde a la necesidad de fomentar, respecto de los entes con potestades punitivas, el ejercicio eficiente de las atribuciones, los cuales están compelidos a ejercer sus funciones de manera eficaz, eficiente. Por regla general, este plazo está relacionado con la gravedad de la falta, las especificidades del procedimiento, la complejidad de la sustanciación o, en su caso, la resolución de los medios de impugnación procedentes contra actos procesales, tal como lo ha sostenido la Sala Superior en las jurisprudencias y tesis antes citadas.

F. Regulación de la potestad sancionadora en los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización.

Aunque los precedentes de la Sala Superior son bastos en el análisis de la potestad sancionadora de las autoridades electorales o de los órganos de los partidos políticos con esas atribuciones, no existe precedente en el cual se haya formulado el análisis de la dicha potestad o su extinción en los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, los cuales, se rigen por la normativa específica que los regula. Por ello, en este apartado se definirá la forma como se encuentra regulada la potestad de esta autoridad en dichos procedimientos.

Es importante indicar, que aun cuando la normativa electoral ha tenido cambios significativos desde la época en que acontecieron los hechos objeto del procedimiento, lo cierto es que procesalmente no han existido cambios significativos en la regulación de los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización.

Además, la sustanciación y resolución de estos procedimientos se regirá con el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de fiscalización, aprobado en sesión extraordinaria de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, mediante Acuerdo INE/CG319/2016, en atención al criterio orientador definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL, porque los actos de autoridad relacionados con dichas normas se agotan en la etapa procesal que los va originando, provocando que se rijan por la norma vigente al momento de su ejecución.

Precisado lo anterior, se debe destacar que los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización que ahora se resuelven iniciaron su sustanciación con el entonces vigente Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, emitido por el Instituto Federal Electoral mediante el Acuerdo identificado con la clave CG199/2011.

En tal norma reglamentaria, en lo que interesa, se reconocían dos tipos procedimientos administrativos en materia de fiscalización seguidos en forma de juicio. Esto es, aquéllos que se inician de manera oficiosa por la autoridad administrativa electoral y aquéllos que se incoaban a instancia de parte, tal distinción resulta relevante dado que, conforme a la naturaleza de cada uno de esos procedimientos, se preveían plazos diferenciados para efecto de que los órganos del entonces Instituto Federal Electoral ejercieran sus respectivas atribuciones en materia de fiscalización de los recursos. Como se razona a continuación:

- **Procedimientos iniciados de oficio**

Es aquel procedimiento administrativo sancionador sobre el financiamiento y gastos de los partidos y agrupaciones que iniciaba de oficio por la Unidad de Fiscalización del entonces IFE, (artículo 2, párrafo 1, numeral IV, incisos a y b).

En este caso, la autoridad administrativa electoral tenía el plazo de 30 días para iniciar válidamente los procedimientos administrativos sancionadores, ese plazo se computaba a partir de que se dictara la resolución de revisión de los informes anuales, de precampaña o de campaña, (artículo 20, párrafos 1 y 2).

En el supuesto que se tratara de procedimientos oficiosos de naturaleza distinta a los antes señalados, y aquellos que derivaran de la revisión de los informes anuales, pero que el Instituto Federal Electoral la autoridad no los hubiera conocido de manera directa, podrían ser iniciados por la Unidad de Fiscalización dentro de los 3 años siguientes a aquél en que se suscitara los hechos presuntamente contrarios a las normas

- **Procedimientos de queja**

Es aquel procedimiento administrativo en materia de fiscalización que la Unidad de Fiscalización iniciaba a petición de parte partir del escrito de denuncia que presente cualquier interesado, por presuntas violaciones a la normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los recursos de los partidos y agrupaciones (artículos 2, párrafo 1, numeral IV, inciso c, así como 20).

En este supuesto, por regla no se preveía expresamente un plazo para efecto de determinar si una queja se había presentado de manera oportuna y, por ende, si la autoridad administrativa electoral estaba en aptitud jurídica de ejercer sus facultades de investigación y, en su caso, dilucidar responsabilidad e imposición de sanción correspondiente.

El único caso en el que se regulaba un plazo para la presentación de la queja, consistía en las denuncias vinculadas con los dictámenes anuales de los informes de gastos, caso en el cual se disponía de 3 años para efecto de presentar la queja respectiva, computados a partir de la publicación de tal resolución en el Diario oficial de la Federación, (artículo 24, párrafo 1, fracción III).

- **Etapas del procedimiento administrativo en materia de fiscalización**

Precisado lo anterior y para efecto de dar claridad al análisis de la materia de los procedimientos que ahora se resuelven, es importante señalar, de manera genérica, cuáles eran las etapas que integraban los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización regulados en el reglamento en consulta.

- i. **Inicio.** El Consejo General o la Unidad de Fiscalización del entonces Instituto Federal Electoral estaba en aptitud jurídica de ordenar el inicio de un procedimiento **cuando tuvieran conocimiento de hechos** que pudieran configurar una violación al abrogado Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos y agrupaciones (artículo 20, párrafo 1).
- ii. **Investigación.** La Unidad de Fiscalización del entonces IFE se allegaría de los elementos de convicción que estimara pertinentes para integrar y sustanciar el expediente del procedimiento respectivo (artículos 13, párrafo 3; 29 y 30).
- iii. **Ampliación del plazo para el Proyecto de Resolución.** La Unidad de Fiscalización podía acordar la ampliación del plazo de sesenta días para presentar los proyectos de resolución cuando la naturaleza de las pruebas ofrecidas o de las investigaciones lo requirieran (artículo 28, párrafo 5).
- iv. **Emplazamiento y contestación.** Cuando se estimara que existían indicios suficientes respecto de la probable comisión de irregularidades, la Unidad de

Fiscalización del entonces IFE emplazaría al denunciado, corriéndole traslado con todos los elementos que integraran el expediente respectivo para que contestara por escrito y aportara las pruebas que estimara procedentes (artículo 31, párrafo 1).

- v. **Cierre de instrucción y elaboración del Proyecto de Resolución.** Una vez agotada la instrucción, la Unidad de Fiscalización del entonces IFE emitiría el acuerdo de cierre respectivo y elaboraría el Proyecto de Resolución correspondiente, mismo que se sometería a consideración del Consejo General para su aprobación en la siguiente sesión que celebrara (artículo 32).
- vi. **Resolución.** El Consejo General podía aprobar el proyecto en los términos en que se le presentara; aprobarlo y ordenar que se realizara el engrose en el sentido de las consideraciones de la mayoría; o bien, rechazarlo y ordenar su devolución a la Unidad de Fiscalización del entonces IFE para que elaborara uno nuevo en el sentido de las consideraciones de la mayoría (artículo 33).

- **Plazo para ejercer válidamente la facultad sancionadora**

Ahora bien, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización vigente al momento de determinar la responsabilidad y la sanción correspondiente, es coincidente al establecer el plazo de cinco años para que esta autoridad electoral finque las responsabilidades en materia de fiscalización. Por tanto, tal como se razonó en los apartados anteriores, a fin de observar los principios de legalidad, certeza, seguridad jurídica y acceso efectivo a la impartición de justicia, previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución federal, los aludidos momentos para instaurar el procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, **invariablemente están supeditados a no rebasar el plazo de cinco años previsto a favor de esta autoridad para fincar las responsabilidades respectivas.**

El marco jurídico y legal expuesto con anterioridad sirve de base para sostener, que en el presente asunto no se actualiza ninguna de las vertientes de extinción de la potestad sancionadora de esta autoridad, porque no ha transcurrido el plazo de cinco años previsto en la normativa electoral para que prescriban los hechos de la conducta infractora y para que se determine la responsabilidad y las sanciones aplicables a las infracciones.

Ahora bien, el procedimiento en que se actúa, se ordenó con la finalidad de determinar si los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano cumplieron con sus obligaciones en materia de fiscalización derivado de la expedición de 702 recibos de reconocimientos por actividades políticas “REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA” y establecer el beneficio económico que representó la emisión de los mismos, lo cual implicó para la autoridad sustanciadora la localización de 702 personas en todo el país, situación que generó un sin número de diligencias a los ciudadanos involucrados, así como a diversas autoridades con la finalidad de lograr la localización de los mismos, y así estar en condiciones idóneas de determinar la campaña beneficiada.

En este tenor, de la cronología de las actuaciones referidas en los antecedentes, se advierte de manera clara el constante e ininterrumpido actuar de la autoridad fiscalizadora para estar en posibilidad de dictar la resolución que en su caso correspondiera.

No obsta a la anterior conclusión, que los hechos generadores de la infracción hayan acontecido en el año dos mil doce, porque conforme a lo previsto en los artículos 361, numeral 2, 372, numeral 4 del derogado Código de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente en esa época, así como los artículos 25, párrafo 1 y 26, fracción V del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización vigente en ese momento, el plazo de cinco años con que cuenta esta autoridad para fincar las responsabilidades administrativas no ha variado. Por lo que, si esta autoridad tuvo conocimiento de los hechos infractores a partir de lo mandatado el veintiséis de septiembre de dos mil trece, y se ordenó, el inicio del procedimiento, es evidente que se interrumpió el plazo previsto para la prescripción de la falta, toda vez que se realizaron las diligencias con mucha anterioridad al vencimiento de los cinco años.

5. Estudio de Fondo.- Que al no existir cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, de conformidad con lo establecido en el Punto Resolutivo DÉCIMO SEGUNDO, en relación con el Considerando 2.3, inciso a), conclusiones 87 y 88⁷ de la Resolución CG242/2013; así como del análisis de los documentos y actuaciones que integran el expediente, se desprende que el fondo del presente asunto se constriñe en determinar si los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano cumplieron con sus obligaciones

⁷ Al respecto conviene aclarar que, si bien la autoridad estableció dos conclusiones respecto de los recibos, del análisis a las consideraciones realizadas por la autoridad durante la revisión del informe correspondiente al ejercicio 2012, se aprecia que se trata pues de los mismos hechos, la misma conducta y que formaron parte de una sola observación de origen, en la que se advirtió que el sujeto obligado presentó los 702 recibos de reconocimiento y los cuales no detallaban las actividades realizadas ni la campaña beneficiada, por lo que su estudio se realiza de manera conjunta.

en materia de fiscalización derivado de la expedición de 702 recibos de reconocimientos por actividades políticas “REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA” y establecer el beneficio económico que representó la emisión de los mismos; por lo anterior, en un primer momento la autoridad electoral deberá acreditar si los recibos presentados con el Informe Anual del Partido de la Revolución Democrática del ejercicio dos mil doce, corresponden a un gasto que deba cuantificarse a los egresos reportados en las entonces campañas postuladas por la otrora coalición en comento para la Presidencia, Senadores de la República y/o Diputados Federales durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012, en su caso, acumular al monto principal para efectos del rebase de tope de gastos de campaña de los entonces candidatos a cargos de elección por mayoría relativa de la otrora coalición.

De este modo, debe confirmarse el destino del egreso realizado en 702 recibos de Reconocimiento por Actividades Políticas “REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA”; así como, determinar que campañas fueron beneficiadas por los sujetos incoados; y si estos se apegaron o incumplieron con lo dispuesto en los artículos 38, numeral 1, inciso a), 83 numeral 1, inciso d) fracciones I y III, 229, numeral 1, 342, numeral 1, inciso f) y 344 numeral 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 149 numeral 1, 162 y 210 del Reglamento de Fiscalización vigente en dos mil doce que a la letra se transcriben:

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

“Artículo 38

1. Son obligaciones de los Partidos Políticos Nacionales:

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; (...)”

“Artículo 83

1. Los partidos políticos deberán presentar ante la Unidad los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas:

(...) d) Informes de campaña:

I. deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente. (...)

III. Los informes finales serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al de la Jornada Electoral; y; (...)."

"Artículo 229.

1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General. (...)"

"Artículo 342.

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos al presente Código: (...)

f) Exceder los topes de gastos de campaña; (...)"

"Artículo 344.

1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular al presente Código:

(...) e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecido por el Consejo General; y (...)"

Reglamento de Fiscalización

"Artículo 149

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del partido, agrupación, organizaciones de observadores y organización de ciudadanos, la persona a quien se efectuó el pago. Dicha documentación deberá cumplir con todos los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables, con excepción de lo señalado en los artículos 164, 166 al 168 del Reglamento. (...)."

“Artículo 162.

1. Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean contratados, utilizados o aplicados durante el periodo de campaña y además cumpla cualquiera de los criterios siguientes:

- a) Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones federales;*
- b) Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del partido y su respectiva promoción;*
- c) Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la Plataforma Electoral; y*
- d) Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de los gastos se realice posteriormente. (...)”*

“Artículo 210.

1. Durante las campañas electorales, los pagos que realicen los partidos o coaliciones por este concepto, contarán para efectos de los topes de gasto de las campañas correspondientes y les serán aplicables lo establecido en los artículos 209 y 211 del Reglamento. (...)”

De las premisas normativas citadas del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos tienen diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su actuar a los principios del estado democrático, garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues, con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación.

En el caso concreto, tienen la obligación de reportar en sus Informes los ingresos totales y gastos que hayan realizado durante el periodo que corresponda, así como de presentar la información y documentación veraz que el órgano fiscalizador de

este Instituto les requiera, apegándose siempre a los principios de certeza, transparencia y rendición de cuentas, de manera que aquélla se encuentre en condiciones de verificar la veracidad de lo reportado indebidamente dentro de los informes anuales por cuanto hace a la totalidad de los gastos ejercidos, con base en la presentación de documentación idónea para tal efecto.

Del análisis previo, se advierte que los partidos políticos y coaliciones tienen la obligación de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y el monto de ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación.

El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador contar con toda la información y documentación comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado Democrático.

En este orden de ideas, el artículo 38, numeral 1, inciso a) del Código en cita establece diversas obligaciones a los partidos políticos, tales como el respeto absoluto de la norma y ajustar su conducta, así como la de sus militantes y simpatizantes, a los principios del Estado democrático.

Así, al actuar voluntariamente fuera de los cauces legales al reportar arteramente e intentar engañar a la autoridad fiscalizadora sobre el destino de los recursos, se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, y no únicamente su puesta en peligro.

En este sentido, del artículo 83 del multicitado Código, se traduce en la necesidad de que la autoridad pueda vigilar y fiscalizar a cabalidad que las actividades de los Partidos Políticos y coaliciones se desarrollen con apego a la ley evitando la vulneración del principio de certeza, es decir, debe constatar que de manera efectiva el manejo de los recursos públicos y privados cuya aplicación debe adecuarse a los fines y naturaleza de los institutos políticos, tales como promover la participación del pueblo en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación nacional.

Aunado a lo anterior, el artículo 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, establece que los partidos políticos y coaliciones tienen la obligación de reportar y presentar ante el órgano fiscalizador el registro contable de sus ingresos y egresos con la documentación original expedida a su nombre, teniendo el órgano fiscalizador la facultad de solicitar en todo momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos y coaliciones dicha documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de las operaciones reportadas.

Asimismo, el artículo 162, numeral 1 del Reglamento en cita, establece que también se consideran gastos de campaña los que sean contratados utilizados o aplicados durante el periodo de campaña, aquellos que tengan la finalidad de propiciar la exposición de los programas y acciones de los candidatos, con fines tendientes a la obtención del voto, o cuyo provecho sean las campañas federales; al respecto, el artículo 210, numeral 1 del mismo ordenamiento señala que los pagos realizados por este concepto contarán para efectos de los topes de campaña.

En este sentido, los artículos 229, numeral 1; 342, numeral 1, inciso f) y 344, numeral 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales relativos a la obligación de los sujetos obligados de ajustarse a los límites establecidos por la autoridad electoral respecto a los gastos de campaña, cuya finalidad es garantizar la equidad en la contienda interna de los actores políticos.

Además, de los mismos preceptos legales se advierte que los partidos políticos y coaliciones tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad fiscalizadora las erogaciones relacionadas con los gastos de campaña de sus candidatos.

Para tener certeza de que los partidos políticos y coaliciones cumplen con la obligación antes citada, se instauró todo un sistema y procedimiento jurídico para conocer tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los partidos y coaliciones políticas; de esta manera, dichos entes tienen la obligación de reportar ante esta autoridad electoral todos y cada uno de los gastos erogados por concepto de las actividades antes indicadas.

Lo anterior con la finalidad de proteger el bien jurídico tutelado por la norma que son los principios de legalidad, transparencia, rendición de cuentas y certeza, mediante la obligación de reportar en los informes de campaña respecto del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento,

especificando los gastos que se realicen, es decir, debe verificarse la aplicación lícita de los reconocimientos por actividades políticas.

En este sentido, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los postulados que formulen.

Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.

Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral.

En cuanto a los preceptos reglamentarios, los partidos políticos tienen la obligación de reportar y presentar ante el órgano fiscalizador el registro contable de sus ingresos y egresos con la documentación original expedida a su nombre, teniendo el órgano fiscalizador la facultad de solicitar en todo momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de las operaciones reportadas.

Así, los artículos citados tienen como propósito fijar reglas de control a través de las cuales se aseguren los principios de rendición de cuentas, legalidad, certeza y transparencia, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con documentación original la totalidad de las operaciones -ingresos y egresos- que reciban los partidos.

Origen del procedimiento.

Resulta importante para efecto de claridad en el desarrollo de la línea de investigación señalar las causas que dieron lugar al inicio del procedimiento administrativo sancionador oficioso que por esta vía se resuelve.

En este sentido, de la revisión al Dictamen Consolidado y la Resolución CG242/2013⁸ se desprende que en el marco del procedimiento de revisión de los Informes Anuales de ingresos y egresos de los Partidos Políticos Nacionales correspondientes al ejercicio 2012, en específico el relativo al Partido de la Revolución Democrática, en consideración con lo previsto en el Resolutivo DÉCIMO SEGUNDO, en lo relativo con el Considerando 2.3, inciso a), respecto de las conclusiones 87 y 88, toda vez que durante la revisión de su Informe Anual de Ingresos y Egresos correspondiente al ejercicio dos mil doce, se advirtieron irregularidades que pueden constituir hechos presumiblemente violatorios de la normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los recursos, derivado de lo siguiente:

- Durante la revisión a la cuenta “Servicios Personales”, subcuenta “Reconocimientos por Actividades Políticas (Promoción del Voto)”, se observaron registros de los cuales no se localizaron las pólizas ni documentación soporte (anexo 15 del Dictamen).
- En respuesta, el partido en comento presentó 17 carpetas con documentación por entidades, de las que se advirtió respecto a los estados materia del procedimiento lo siguiente:
 - Si bien el partido presentó las pólizas con los recibos “REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA”; dichas erogaciones no fueron reportadas en el Proceso Electoral Federal 2012, ya que al verificar las balanzas no se observó la transferencia en especie, y en los auxiliares contables se observó que canceló el registro inicial de transferencia a la campaña y lo reclasificó a la cuenta honorarios asimilados a asalariados, situación que resultó improcedente.
 - Asimismo, se observó que la totalidad de los recibos carecen de datos que identifiquen las actividades realizadas y la campaña beneficiada.

⁸ Resolución que puede ser consultada en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral, con la liga: http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/UF/UF-PP/IA-Fiscalizacion/IA-ResolucionesCGDocs/2012/00_Antecedente_y_Considerandos.pdf

- En segunda vuelta, el partido presentó nueva documentación y formuló nuevas observaciones, una vez analizada, la autoridad electoral determinó lo siguiente:
 - En relación a Jalisco, se observó el reconocimiento de un gasto por concepto de REPAP (172 recibos) por un importe de \$1,032,000.00.
 - Por lo que hace al resto de las entidades, se observó que no reconoció el gasto por concepto de REPAP (530 recibos) por un importe de \$2,188,232.00, lo cual fue sancionado en la resolución de mérito.
- Adicionalmente, todos los recibos carecen de la descripción de la actividad política realizada y tipo de campaña, por lo que se determinó el inicio de un oficioso

Ahora bien, para mayor claridad se detallan la cantidad de recibos, montos y entidades involucradas:

Entidad	N° de recibos	Importe
Baja California	22	\$121,432.00
Campeche	30	\$180,000.00
Chihuahua	58	\$344,000.00
Jalisco	172	\$1,032,000.00
Tabasco	420	\$1,542,800.00

Al respecto, toda vez que diversas campañas electorales federales se beneficiaron con el gasto de 702 recibos de Reconocimiento por Actividades Políticas “REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA”, otorgados por un total de \$3,220,232.00, correspondiente a los Comités Ejecutivos Estatales de Baja California, Campeche, Chihuahua, Tabasco y Jalisco, monto que debió ser cuantificado al tope de gastos correspondiente de los entonces candidatos postulados por la otrora coalición “Movimiento Progresista”, integrada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano; y los mismos fueron reportados como gasto ordinario, y no en el Informe de Campaña correspondiente, el Consejo General ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del Partido de la Revolución Democrática con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normatividad electoral en materia de fiscalización por parte de los sujetos involucrados, así como para determinar el beneficio económico que representó la emisión de los recibos y si corresponden a un gasto que deba cuantificarse a los egresos reportados en las

entonces campañas postuladas por la otrora coalición para la Presidencia, Senadores de la República y Diputados Federales.

Asimismo, en su caso acumular al monto principal, para efectos del rebase de tope de gastos de campaña de los entonces candidatos a cargos de elección de la otrora coalición durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.

Inicio de la investigación.

Consecuentemente, el ocho de octubre de dos mil trece, la Unidad de Fiscalización acordó integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de expediente, notificar al Secretario del Consejo de su inicio, así como publicar el acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en los estrados del Instituto.

Aunado a lo anterior, y toda vez que los reconocimientos por actividades políticas (REPAP), beneficiaron a las campañas de los candidatos postulados por la Coalición Movimiento Progresista, la Unidad de Fiscalización acordó ampliar los sujetos incoados del procedimiento administrativo sancionador en que se actúa; es decir, si bien en un primer momento el sujeto investigado era el Partido de la Revolución Democrática, de las respuestas obtenidas a los requerimientos de esta autoridad, se arribó a la conclusión que el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, también se beneficiaron de las actividades políticas amparados en los Reconocimiento por Actividades Políticas “REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA”, entregados con motivo de la Campaña Federal a diversos cargos durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.

Derivado de lo anterior, inicialmente se dirigió la línea de investigación a solicitar a la Dirección de Auditoría toda la documentación soporte relacionada con la observación materia de análisis.

Consecuentemente, la Dirección en comento dio contestación⁹ remitiendo copia de la documentación solicitada, consistente en:

⁹ La información remitida por la Dirección en comento, se considera documental pública en términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 1, fracción I, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ella consignado; en virtud de haberse emitido por parte de autoridad competente en ejercicio de sus funciones, mientras que la documentación presentada por el partido durante la revisión del informe constituyen una documental privada que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el

- Nueve pólizas con 530 recibos “REPAP-COA MOVIMIENTO PROGRESISTA” correspondientes a los Comités Ejecutivos Estatales de Baja California, Campeche, Chihuahua y Tabasco por un importe de \$2,188,232.00.
- Veinte pólizas con 172 recibos “REPAP-COA MOVIMIENTO PROGRESISTA” correspondientes al Comité Ejecutivo Estatal de Jalisco por un importe de \$1,032,000.00.

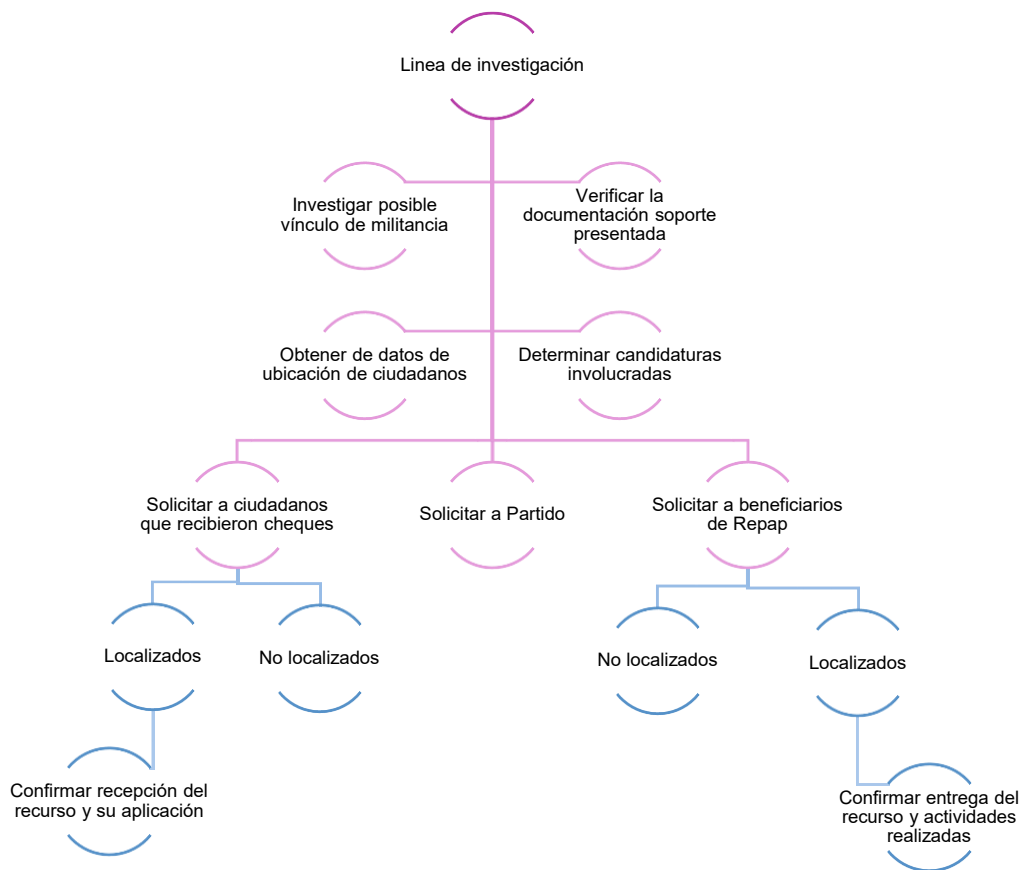
Adicionalmente, remitió diversas pólizas de cheque relacionadas con los 702 recibos de reconocimientos por actividades políticas, así como copias de los cheques. Al respecto, el análisis y detalle de la información recibida se agrega como **Anexo 3** de la presente Resolución.

Visto lo anterior, a fin de verificar si se acreditan los extremos de los supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, deberán analizarse y valorarse en su conjunto, cada uno de los elementos de prueba que obran dentro del expediente de mérito, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral federal.

Así pues, toda vez que los Reconocimiento por Actividades Políticas “REPAP-COA MOVIMIENTO PROGRESISTA”, que presuntamente beneficiaron diversas campañas federales, no cuentan con la totalidad del soporte documental que compruebe las erogaciones realizadas, esta autoridad realizó diversas diligencias a efecto de verificar lo reportado por los sujetos obligados.

En este orden de ideas, la línea de investigación partió del siguiente planteamiento:

21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.



En virtud de lo anterior, el órgano fiscalizador de este Instituto realizó diversas diligencias a efecto de solicitar información a los sujetos involucrados con el propósito de allegarse de mayores elementos de convicción respecto a comprobación de los recursos otorgados a través de los Reconocimiento por Actividades Políticas “REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA” en comento, a los siguientes sujetos:¹⁰

¹⁰ Al respecto, los oficios de respuesta de las diversas autoridades y la documentación agregada a los mismos, se consideran documentales públicas en términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 1, fracción I, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización razón por la cual las mismas tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellas consignados; en virtud de haberse emitido por parte de autoridad competente en ejercicio de sus funciones.

Mientras que, los escritos de respuesta de los sujetos incoados y de los ciudadanos requeridos y la documentación anexa a los mismos constituyen una documental privada que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los

- Dirección de Auditoría
- Partidos políticos
- Dirección Jurídica
- Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
- Servicio de Administración Tributaria
- Secretaría de Relaciones Exteriores
- Instituto Mexicano del Seguro Social
- Registro Nacional de Población
- Comisión Nacional de Protección Social en Salud
- Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
- Ciudadanos que presuntamente recibieron el REPAP

Del requerimiento de información a los ciudadanos presuntamente beneficiados por los recibos por reconocimiento por actividades políticas REPAP, respuestas que se detallan en el **anexo 1**, se obtuvo lo siguiente:

- a) 102 ciudadanos confirmaron haber suscrito el recibo y la recepción del dinero.
- b) 3 ciudadanos confirmaron la firma del recibo, pero negaron haber recibido el dinero.
- c) 26 ciudadanos negaron la suscripción del recibo, pero confirmaron la recepción del recurso.
- d) 70 ciudadanos negaron la suscripción del recibo, aclarando que recibieron una parte del importe del mismo¹¹.
- e) 304 ciudadanos negaron la suscripción del recibo y la recepción del dinero.
- f) 197 ciudadanos no dieron respuesta al requerimiento y/o no fueron localizados.

De lo anterior, se desprende que existen diversos supuestos que parten de una hipótesis de facto distinta entre sí, por lo que será necesario realizar un análisis diferenciado a fin de que se pueda arribar a la verdad legal sobre la aplicación y destino del egreso reportado por concepto de recibos de reconocimiento por actividades políticas, realizado por el partido político.

demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

¹¹ Los recibos señalaban un importe de \$6,000.00 y los ciudadanos señalaron recibir un aproximado de "\$200.00"

Aunado a lo anterior y a partir del análisis de las constancias remitidas por la Dirección de Auditoría, fue necesario requerir a los institutos políticos, a los ciudadanos implicados en el manejo de los recursos con los que presuntamente fueron pagados los recibos y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a efecto que remitieran la información y documentación atinente y manifestaran las aclaraciones que a su interés conviniera, como se detalla en los **anexos 2 y 3**.

Derivado de lo anterior, de los hallazgos obtenidos se tuvo conocimiento que los partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano podrían estar involucrados en los hechos materia de investigación, por lo que la Unidad de Fiscalización acordó ampliar la línea de investigación por lo que hace a los sujetos investigados del procedimiento en que se actúa.

Asimismo, procedió a emplazar a los institutos políticos, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, corriéndole traslado con todas las constancias que integran el expediente¹².

En respuesta a lo anterior, el seis de junio de dos mil dieciocho, el C. Camerino Eleazar Márquez Madrid, en su carácter de representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, ante el Consejo General de este Instituto, atendió el emplazamiento señalando medularmente lo siguiente:

- Niega que el Partido de la Revolución Democrática, haya incurrido en la violación de los artículos 342, numeral 1, inciso f) y 344, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización.
- Que el emplazamiento realizado es violatorio de toda norma procesal, dado que la imputación que se le realiza es subjetiva, abstracta y genérica.
- Que la autoridad deja de indicar cuales son los supuestos 325 REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA, que van a ser considerados para efectos de rebase de topes de gastos de campaña.
- Que se deja de indicar mediante un razonamiento jurídico cuales son las razones de hecho y de derecho que motivan a concluir que el importe de \$1,734,700.00, no fue debidamente comprobado.

¹² Exceptuando aquellas que contienen datos personales, mismas que acorde a lo que disponen los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 15 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública tienen el carácter de información confidencial, en cumplimiento a lo que establece el artículo 24, fracción VI del mismo ordenamiento.

- Que al no considerarse las premisas procedimentales en el emplazamiento, significa una grave afectación al debido proceso, que deja en estado de indefensión al instituto político.
- Que no existen acusaciones específicas, ubicadas en tiempo, lugar y circunstancias.
- Que mediante oficio, suscrito por el Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del partido, de manera puntual y específica se indicó la campaña beneficiada respecto de los recibos de reconocimientos por actividades políticas en campaña federal.
- Que atendiendo a las reglas generales de la valoración de las pruebas, la experiencia y la sana crítica, es dable arribar a la conclusión de que se encuentra debidamente acreditado el origen y destino de los recursos investigados, por lo que debe declararse infundado el procedimiento.
- Que al sumar los importes que describe la autoridad, de ninguna manera se incurre en rebase de topes de campaña.

Por su parte, mediante oficio REP-PT-INE-PVG-188/2018, recibido por esta autoridad el trece de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual, el C. Pedro Vázquez González, en su carácter de Representante Propietario del Partido del Trabajo, ante el Consejo General de este Instituto, atendió el emplazamiento manifestando lo siguiente:

- Que en el convenio de coalición, se estableció que los partidos coaligados aportarían en efectivo la totalidad de los recursos que se recibieran por concepto de gastos de campañas.
- Que para la administración y reporte de los gastos de campaña, se constituiría un Consejo de Administración, integrado por un representante de cada uno de los partidos coaligados y el designado por el Partido de la Revolución Democrática, sería el responsable del órgano de finanzas de la coalición.
- Que el Partido del Trabajo, no cuenta con la información soporte del caso.

Así también, consta en autos del expediente en que se actúa, el oficio número MC-INE-361/2018, recibido por esta autoridad el doce de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual el C. Juan Miguel Castro Rendón, en su carácter de Representante de Movimiento Ciudadano, ante el Consejo General del Instituto, atendió el emplazamiento señalando lo siguiente:

- Que el responsable de realizar la administración de los recursos de la campaña fue el Partido de la Revolución Democrática.
- Que revisadas las constancias y de conformidad a los argumentos vertidos por el Partido de la Revolución Democrática, existen elementos suficientes para negar categóricamente y expresamente que Movimiento Ciudadano, hay incurrido en una violación a los artículos 342, numeral 1, inciso f) y 344, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización.
- Que el emplazamiento realizado, es violatorio de toda norma procesal.
- Que la imputación que se le realiza al Partido Político, es subjetiva, abstracta y genérica, porque viola flagrantemente las reglas del debido proceso.
- Que la autoridad deja de indicar cuales son los supuestos 325 REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA, que deberán ser considerados para efectos de rebase de topes de gastos de campaña.
- Que se deja de indicar mediante un razonamiento jurídico cuales son las razones de hecho y de derecho que motivan a concluir que el importe de \$1,734,700.00, no fue debidamente comprobado.
- Que al no considerarse las premisas procedimentales en el emplazamiento, significa una grave afectación al debido proceso, que deja en estado de indefensión al instituto político.
- Que no existen acusaciones específicas, ubicadas en tiempo, lugar y circunstancias.
- Que mediante oficio, suscrito por el Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del partido, de manera puntual y específica se indicó la

campaña beneficiada respecto de los recibos de reconocimientos por actividades políticas en campaña federal.

- Que atendiendo a las reglas generales de la valoración de pruebas, la experiencia y la sana crítica, es dable arribar a la conclusión de que se encuentra debidamente acreditado el origen y destino de los recursos investigados, por lo que se debe declarar infundado.
- Que los importes descritos, al sumarlos a los gastos de las campañas y candidaturas beneficiadas, de ninguna manera se incurre en rebase de topes de gastos de campaña.
- Que se violentan los principios jurídicos *ius puniendi* y *tempus regit actum* que rigen la materia penal y que son de aplicabilidad para todo régimen sancionador en materia electoral, en cuanto a la integración del procedimiento, ya que no se cumple con lo que los aforismos jurídicos invocan.
- Que el tipo jurídico no encuadra a la denuncia o querella, lo que genera un perjuicio al partido político.
- Que Movimiento Ciudadano, siempre ha conducido sus actividades dentro de los cauces legales, actuando de buena fe y ajustando su conducta y la de sus precandidatos y candidatos a los postulados de la Ley.
- Que no se aporta hecho alguno que demuestre violación alguna, ya que dicho requisito debe considerarse que se acredita cuando se hacen valer agravios debidamente configurados.

Así pues, dichos escritos y documentación agregada a los mismos, constituyen una documental privada que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo hará prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

Como resultado de todo lo anterior, se agregaron al expediente todas las constancias, información y documentación remitida por las autoridades, instituciones políticas y personas físicas, mismas que implican múltiple material probatorio que llena a este órgano resolutor a la construcción de diversas conclusiones.

Es preciso señalar que derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en que se actúa y supuestos de conductas que se presentan, a efecto de mayor claridad, resulta conveniente dividir en apartados el estudio de fondo del procedimiento de mérito. Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que con el objeto de sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de la autoridad electoral.

En este orden de ideas, el análisis del presente asunto se efectuará conforme a lo siguiente:

- A.** Recibos de Reconocimiento por Actividades Políticas en Campaña Federal (REPAP) y recursos confirmados por los beneficiarios.
- B.** Recibos de Reconocimiento por Actividades Políticas en Campaña Federal (REPAP) de beneficiarios no localizados.
- C.** Recibos de Reconocimiento por Actividades Políticas en Campaña Federal (REPAP) y recursos no reconocidos por los beneficiarios.
- D.** Estudio del probable rebase de tope de gastos de campaña durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.

Una vez precisado lo anterior, y a fin de conocer los razonamientos realizados por la autoridad respecto de las conductas realizadas por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, se procede a efectuar el estudio y análisis de cada uno de los apartados considerativos aludidos.

A. Recibos de Reconocimiento por Actividades Políticas en Campaña Federal (REPAP) confirmados por los beneficiarios.

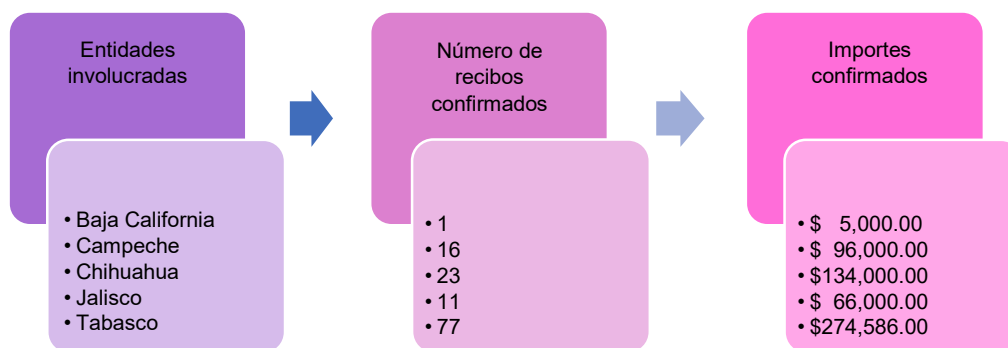
En el presente apartado se analizará el destino de los recursos respecto de 128 recibos Reconocimiento por Actividades Políticas “REPAP-COA-MOVIMIENTO

PROGRESISTA”; y una vez acreditado lo anterior, estar en aptitud de determinar las campañas electorales beneficiadas con dichas actividades, por lo que dichos egresos se cuantificaran al tope de gastos correspondiente a los entonces candidatos involucrados, postulados por la otrora coalición “Movimiento Progresista” durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.

En ese sentido, una vez analizada la documentación remitida por la Dirección de Auditoría, relativa a los registros contables y comprobación presentada por el Partido de la Revolución Democrática en el marco de la revisión de su Informe Anual correspondiente al ejercicio dos mil doce, se dirigió la línea de investigación a confirmar con los ciudadanos señalados como beneficiarios.

Al respecto, una vez realizadas las diligencias necesarias para obtener los datos de ubicación de los ciudadanos en comento, se les requirió que confirmaran la suscripción del recibo y la recepción del recurso, asimismo informaran el importe recibido, el detalle de la actividad realizada e identificaran a qué campaña electoral se benefició.

Del análisis a los escritos de respuesta¹³ de los requeridos se advirtió que 128 ciudadanos confirmaron haber suscrito los recibos y la recepción de los recursos por importe de \$575,586.00, como se advierte del detalle agregado como **Anexo 1**, para mayor claridad los resultados se grafican a continuación:



A fin de determinar si los ciudadanos en comento, tenían algún vínculo de militancia con los partidos se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos

¹³ Los escritos de respuesta de los ciudadanos requeridos y la documentación anexa a los mismos constituyen una documental privada que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obran en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

Políticos a efecto de que verificara si las personas involucrados se encontraban registrados como militantes de alguno de los institutos políticos investigados.

En respuesta a lo anterior, la Dirección en comentario remitió¹⁴ una base de consulta del padrón de afiliados que fue entregado por los institutos políticos en la temporalidad investigada, y en relación a los 128 ciudadanos que forman parte del estudio de este apartado, se estableció que 86 tienen un vínculo de militancia con el Partido de la Revolución Democrática y 42 no están afiliados a los partidos incoados.

Por otra parte, se dirigió la línea de investigación a confirmar la dispersión de recursos reportada por el Partido de la Revolución Democrática, por lo que se requirió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a efecto de que remitiera copia certificada de los cheques emitidos por el partido para la entrega del recurso, en virtud de lo anterior, la Comisión en comentario dio respuesta¹⁵ remitiendo la documentación solicitada, la cual al adminicularla con la documentación entregada por la Dirección de Auditoría como se detalla en el **anexo 3**.

Aunado a lo anterior, se observó que los cheques que se anexaron como respaldo del egreso político por concepto de recibos de reconocimiento por actividades políticas REPAP, fueron emitidos en favor de diversos ciudadanos que, a su vez, endosaron los cheques en favor de otras personas; por lo que se realizaron las diligencias necesarias para obtener los datos de ubicación de los treinta y siete ciudadanos involucrados con las operaciones de los cheques que presuntamente amparaban el pago de recibos por reconocimientos por actividades políticas, por lo que una vez que se contó con los elementos necesarios por lo que hace a treinta y tres de los ciudadanos, se les requirió a efecto de que confirmaran haber recibido y cobrado los cheques expedidos por el Partido de la Revolución Democrática; señalaran el concepto por el cual el citado instituto político les hizo entrega de tales importes; indicaran cual fue el destino de los recursos consignados en los títulos de crédito; precisaran si eran militantes, simpatizantes o laboraban para el Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano o Partido del Trabajo y si lo fueron señalaran el periodo de vigencia de dicha calidad.

¹⁴ Los oficios de respuesta de las diversas autoridades y la documentación agregada a los mismos, se consideran documentales públicas en términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 1, fracción I, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización razón por la cual las mismas tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellas consignados; en virtud de haberse emitido por parte de autoridad competente en ejercicio de sus funciones.

¹⁵ La información y documentación remitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se considera una documental pública en términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 1, fracción I, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización razón por la cual las mismas tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellas consignados; en virtud de haberse emitido por parte de autoridad competente en ejercicio de sus funciones.

Consecuentemente, de los 33¹⁶ ciudadanos a los que se les requirió información, 21 atendieron el requerimiento y dieron respuesta¹⁷ a lo solicitado por la autoridad como se aprecia en el detalle agregado como **anexo 2**, señalando en resumen lo siguiente:

- a) 10 beneficiarios o endosatarios, señalaron que se realizó el cobro del cheque y se reintegró al endosante o Comité correspondiente.
- b) 5 beneficiarios o endosatarios, señalaron que se realizó el cobro del cheque y se dispersó el recurso, a representantes de casilla o promotores del voto.
- c) 5 beneficiarios o endosatarios, señalaron que se realizó el cobro del cheque y el recurso se utilizó para desarrollar trabajos de promoción del voto.
- d) 12 beneficiarios o endosatarios no dieron respuesta al requerimiento de información.
- e) 1 beneficiario, negó haber recibido el cheque.

Asimismo, se requirió a la Representación del Partido de la Revolución Democrática ante este Consejo y a los Comités Directivos Estatales del partido en las entidades involucradas, a efecto de que confirmaran la expedición de los cheques correspondientes a la institución de crédito HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, a favor de algunos ciudadanos; señalaran el concepto por el cual se hizo entrega de esas cantidades; detallaran el servicio prestado y/o actividades realizadas por los ciudadanos e indicara cuál fue el destino de los recursos consignados en los citados títulos de crédito; en respuesta los mismos manifestaron en resumen lo siguiente:

Comité	Respuesta ¹⁸
Comité Directivo Estatal de Baja California	Al revisar los archivos generales y contables del Comité Ejecutivo Estatal, no se encontró documentación contable comprobatoria, ya que toda la documentación fue enviada al Comité Ejecutivo Nacional, que la información fue presentada al Instituto Federal Electoral y se indicó el destino de los recursos y se remitió toda la documentación.

¹⁶ Como se ha mencionado, inicialmente eran 37 los sujetos involucrados; sin embargo, solo fueron localizados 33.

¹⁷ Los escritos de respuesta de los ciudadanos requeridos y la documentación anexa a los mismos constituyen una documental privada que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

¹⁸ Los escritos de respuesta de los Comités del Partido y la documentación anexa a los mismos constituyen una documental privada que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

**CONSEJO GENERAL
P-UFRPP 60/13**

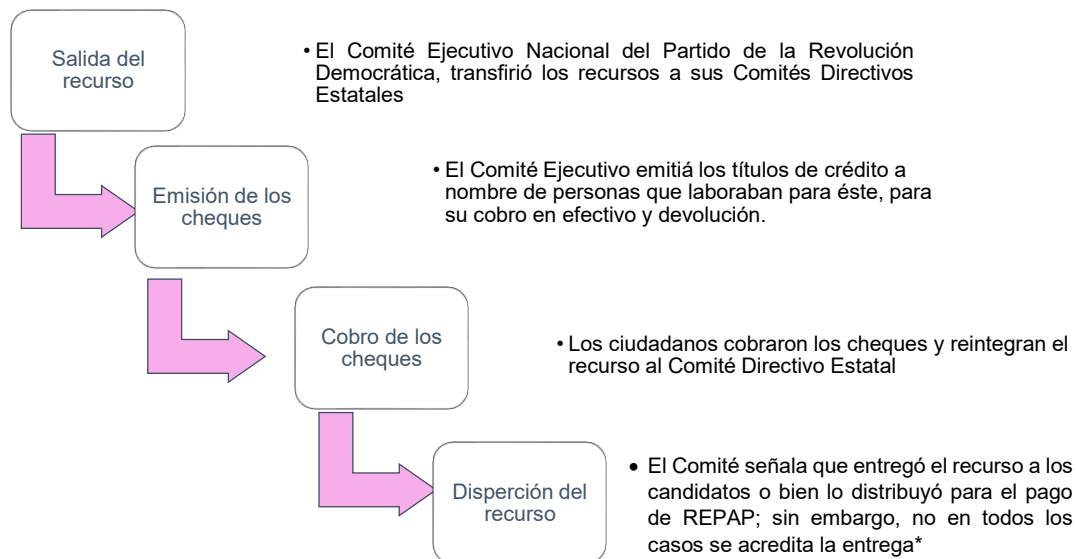
Comité	Respuesta ¹⁸
Comité Directivo Estatal de Campeche	Los expedientes de los cheques, son de la cuenta que fiscaliza el Comité Ejecutivo Nacional, por lo que esa información no se encuentra en poder del Comité Ejecutivo Estatal, pudiendo acceder a esos datos en las oficinas centrales, que es donde se remite la comprobación de las participaciones que reciben por concepto de prerrogativas nacionales y gastos de campaña.
Comité Directivo Estatal de Chihuahua	Los cheques fueron utilizados para el pago de estructura electoral y de promoción del voto, los cuales cambiaron para entregar el pago en efectivo al total de personas que participaron en esas acciones en la elección del 2011-2012, la documentación correspondiente fue presentada en el informe y comprobación del gasto de recursos ante el Comité Ejecutivo Nacional.
Comité Directivo Estatal de Tabasco	Según información proporcionada por la C. Maricela Ocaña Gálvez, quien en esa fecha se desempeñaba como Secretaria de Administración y Finanzas, dichos recursos fueron entregados a los Candidatos a Diputado Federal, para apoyo a las personas que fueron acreditadas como representantes de casilla y representantes generales del Partido de la Revolución Democrática en la Jornada Electoral del 6 de junio de 2012.
Comité Directivo Estatal de Jalisco	Resulta falso lo señalado por la autoridad fiscalizadora, toda vez que es incorrecto lo que se sostiene en el sentido de que los recursos cobrados mediante cheques correspondientes a la institución bancaria HSBC México SA., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, expedidos por el Partido de la Revolución Democrática, haya sido reintegrados al Comité Directivo Estatal, ya que los ciudadanos consultados por la Unidad Técnica de Fiscalización, nunca señalaron o manifestaron haberlo entregado a personal de administración y finanzas o a directivos del Comité Ejecutivo Estatal en Jalisco. Que los recursos nunca fueron ingresados a cuentas bancarias del Comité Ejecutivo Estatal, ni fueron entregados a quienes fungía como dirigentes de ese Comité en el año 2012.
Comité Ejecutivo Nacional	Considerando, la información solicitada se adjunta información de las cuentas y los cheques de los CEE de Baja California, Campeche, Chihuahua, Jalisco, Tabasco, donde se emitieron los cheques, todos de las institución bancaria HSBC, que son cuentas donde se les deposita la prerrogativa del CEN al CEE de índole nacional, operación ordinaria.

Aunado a lo anterior, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano en respuesta a los requerimientos de información señalaron que las campañas beneficiadas fueron las siguientes:

CONSEJO GENERAL P-UFRPP 60/13

Senadores	Baja California 1. Marco Antonio Blasquez Salinas 2. Marina Manuela Calderón Guillen
Senadores	Campeche 1. Gaspar Alberto Cutz Can
Senadores	Chihuahua 1. Victor Manuel Quintana Silveyra 2. Patricia Borunda Lara
Senadores	Tabasco 1. Adan Augusto López Hernández 2. Fernando Enrique Mayans Canabal
Senadores	Jalisco 1. Carlos Lomeli Bolaños 2. Esteban Mario Garaiz Izarra

Derivado del análisis al cumulo de respuestas obtenidas en relación a las operaciones financieras, se obtuvo que el procedimiento de cobro y dispersión del recurso fue el siguiente:



*Los casos en los que no se confirmó y acreditó la entrega del recurso, se analizaran en un apartado subsecuente.

En las relatadas condiciones, del estudio al cumulo probatorio consistente en las constancias, información y documentación remitida por las autoridades, instituciones políticas y personas físicas, en relación a los recibos que fueron confirmados se arriba a las siguientes conclusiones:

- Que el Partido de la Revolución Democrática emitió cheques en favor de personas que laboraran en los Comités Directivos Estatales en las entidades de Baja California, Campeche, Chihuahua, Jalisco y Tabasco, a fin de que los cobraran y le devolvieran el recurso, para su posterior dispersión en efectivo.
- Que 128 ciudadanos confirman que recibieron el recurso, de los cuales solo 102 confirman haber suscrito los reconocimientos, equivalentes a un monto total acumulado de \$575,586.00 (quinientos setenta y cinco mil quinientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.), por concepto de “REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA”.
- Que las actividades realizadas por dicho concepto consistieron en general a labores relacionadas con volanteo y promoción del voto, así como a la representación de la coalición en las mesas directivas de casilla.
- Que el Partido de la Revolución Democrática reconoció que se depositó el recurso en cuentas Comité Ejecutivo Nacional a los Comités Ejecutivos Estatales, prerrogativas para operación ordinaria.
- Que 128 de los recibos presentados con el Informe Anual del Partido de la Revolución Democrática del ejercicio dos mil doce, corresponden a un gasto por un monto de, que debió cuantificarse a los egresos reportados en los informes de campañas de los candidatos a los cargos de Senador en los estados de postulados por la otrora coalición Movimiento Progresista durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, esta autoridad cuenta con elementos suficientes para confirmar el destino de los recursos erogados por concepto de 128 recibos de Reconocimientos por Actividades Políticas para Actividades de Campaña “REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA” emitidos a favor de los ciudadanos identificados en la columna 44 del **anexo 1**, por un monto de \$575,586.00; los cuales están vinculados a la realización de actividades tendientes a la obtención del voto, los cuales debieron ser reportados en el informe

de campaña respectivo, cumpliendo con lo previsto en los artículos 83, numeral 1; inciso d); fracción I del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ahora bien, toda vez que se conoce el destino de la erogación realizada y se obtuvieron los elementos necesarios para determinar las campañas electorales beneficiadas con el gasto de los 128 recibos Reconocimiento por Actividades Políticas “REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA”, identificados en la columna 44 del **anexo 1**, por un monto \$575,586.00 (quinientos setenta y cinco mil quinientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.), expedidos por la otrora coalición Movimiento Progresista, integrada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, lo procedente es declarar **fundado** el presente apartado.

En consecuencia, se ordena acumular al monto establecido por esta autoridad, a los saldos principales determinados durante los procesos de fiscalización correspondientes a los entonces candidatos postulados por la otrora coalición “Movimiento Progresista” durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012, que fueron beneficiados, procedimiento que se detallará en el apartado D de la presente Resolución.

B. Recibos de Reconocimiento por Actividades Políticas en Campaña Federal (REPAP) de beneficiarios no localizados.

En el presente apartado se analizará el destino de los recursos relativos a 197 recibos Reconocimiento por Actividades Políticas “REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA”; y una vez acreditado lo anterior, estar en aptitud de determinar las campañas electorales beneficiadas con dichas actividades, por lo que dichos egresos se cuantificarán al tope de gastos correspondiente a los entonces candidatos involucrados, postulados por la otrora coalición “Movimiento Progresista” durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.

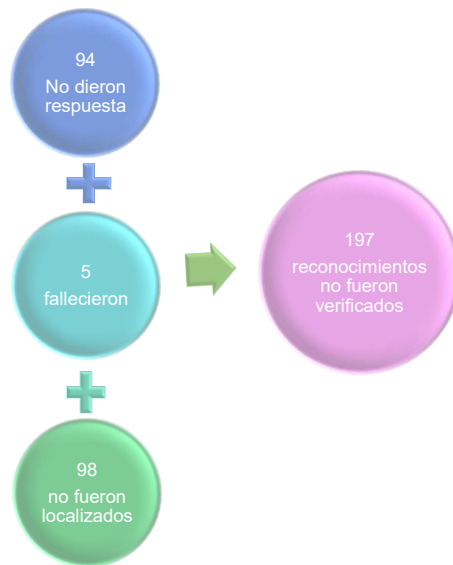
En ese sentido, como se ha señalado derivado del estudio de la documentación presentada por el Partido de la Revolución Democrática en el marco de la revisión de su Informe Anual correspondiente al ejercicio dos mil doce, en relación a las observaciones materia de análisis, se dirigió la línea de investigación a confirmar con los ciudadanos señalados como beneficiarios en los recibos.

Al respecto, esta autoridad realizó las diligencias necesarias para obtener los datos de ubicación de los ciudadanos en comento, a efecto de requerirles que confirmaran

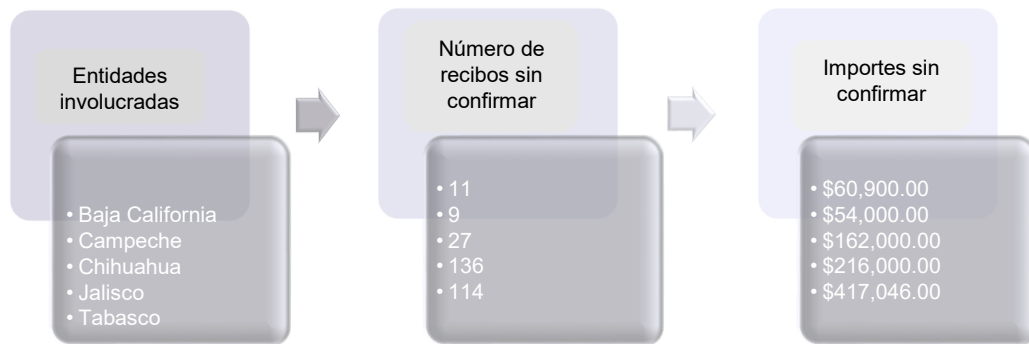
la suscripción del recibo y la recepción del recurso, asimismo informaran el importe recibido, el detalle de la actividad realizada e identificaran a qué campaña electoral se benefició; por tal motivo se solicitó información a las siguientes autoridades:

- Dirección Jurídica
- Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
- Servicio de Administración Tributaria
- Secretaría de Relaciones Exteriores
- Instituto Mexicano del Seguro Social
- Registro Nacional de Población
- Comisión Nacional de Protección Social en Salud
- Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
- Ciudadanos que presuntamente recibieron el REPAP

De la información remitida por las autoridades y las diligencias subsecuentes, se obtuvo lo siguiente:



Derivado de lo anterior, esta autoridad se vio impedida para verificar la recepción de 197 reconocimientos, por un importe acumulado de \$909,946.00, qué actividades realizaron los ciudadanos y qué campañas fueron beneficiadas, como se advierte del detalle agregado como **Anexo 1**, para mayor claridad los resultados se grafican a continuación:



No obstante lo anterior, con el objeto de verificar si los ciudadanos en comento, tenían algún vínculo de militancia con los partidos se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos a efecto de que informara si las personas involucradas se encontraban registrados como militantes de alguno de los institutos políticos investigados.

En respuesta a lo anterior, la Dirección en comento remitió una base de consulta del padrón de afiliados que fue entregado por los institutos políticos en la temporalidad investigada, y en relación a los 197 ciudadanos que forman parte del estudio de este apartado, se estableció que 77 tienen un vínculo de militancia con el Partido de la Revolución Democrática, 2 con el Partido del Trabajo, 1 con Movimiento Ciudadano y 117 no están afiliados a los partidos incoados.

Por otra parte, como se ha señalado, se dirigió la línea de investigación a confirmar la dispersión de recursos reportada por el Partido de la Revolución Democrática, por lo que se requirió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a los ciudadanos que cobraron los cheques que presuntamente amparaban el pago de recibos, a la Representación del Partido de la Revolución Democrática ante este Consejo y a los Comités Directivos Estatales del partido en las entidades involucradas, actuaciones que ya fueron analizadas en el apartado precedente, consideraciones que se tienen por aquí transcritas en obvio de repeticiones inútiles.

En las relatadas condiciones, del estudio al cumulo probatorio consistente en las constancias, información y documentación remitida por las autoridades, instituciones políticas y personas físicas, en relación a los recibos que fueron confirmados se arriba a las siguientes conclusiones:

- Que el Partido de la Revolución Democrática emitió cheques en favor de personas que laboraran en los Comités Directivos Estatales en las entidades de Baja California, Campeche, Chihuahua, Jalisco y Tabasco, a fin de que los cobraran y le devolvieran el recurso, para su posterior dispersión en efectivo.
- Que no se pudo localizar a 98 ciudadanos señalados como beneficiarios de los recibos.
- Que 94 ciudadanos no atendieron el requerimiento de la autoridad.
- Que 5 ciudadanos que se señalan como beneficiarios del reconocimiento fallecieron, por lo que fue materialmente imposible confirmar la operación.
- Que no existen elementos para desestimar la veracidad de 197 recibos “REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA”, por un monto acumulado de \$909,946.00
- Que el Partido de la Revolución Democrática reconoció que emitieron recibos de reconocimiento por actividades políticas tendentes con la obtención del voto.
- Que 197 de los recibos presentados con el Informe Anual del Partido de la Revolución Democrática del ejercicio dos mil doce, corresponden a un gasto por un monto de, que debió cuantificarse a los egresos reportados en los informes de campañas de los candidatos al cargo de Senador postulados por la otrora coalición Movimiento Progresista durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, esta autoridad cuenta con elementos indiciarios con grado de suficiencia para confirmar el destino de los recursos erogados por concepto de 197 recibos de Reconocimientos por Actividades Políticas para Actividades de Campaña “REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA” emitidos a favor de los ciudadanos identificados en la columna 44 del **anexo 1**, por un monto de \$909,946.00; los cuales están vinculados a la realización de actividades tendientes a la obtención del voto, los cuales debieron ser reportados en el informe de campaña respectivo, cumpliendo con lo previsto en los artículos 83, numeral 1; inciso d); fracción I del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ahora bien, toda vez que se conoce el destino de la erogación realizada y se obtuvieron los elementos necesarios para determinar las campañas electorales beneficiadas con el gasto de los 197 recibos Reconocimiento por Actividades Políticas “REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA”, identificados en la columna 44 del **anexo 1**, por un monto \$909,946.00 (novecientos nueve mil novecientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.), expedidos por la otrora coalición Movimiento Progresista, integrada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano lo procedente es declarar **fundado** el presente apartado.

En consecuencia, se ordena acumular al monto establecido por esta autoridad, a los saldos principales determinados durante los procesos de fiscalización correspondientes a los entonces candidatos postulados por la otrora coalición “Movimiento Progresista” durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012, que fueron beneficiados, procedimiento que se detallará en el apartado D de la presente Resolución.

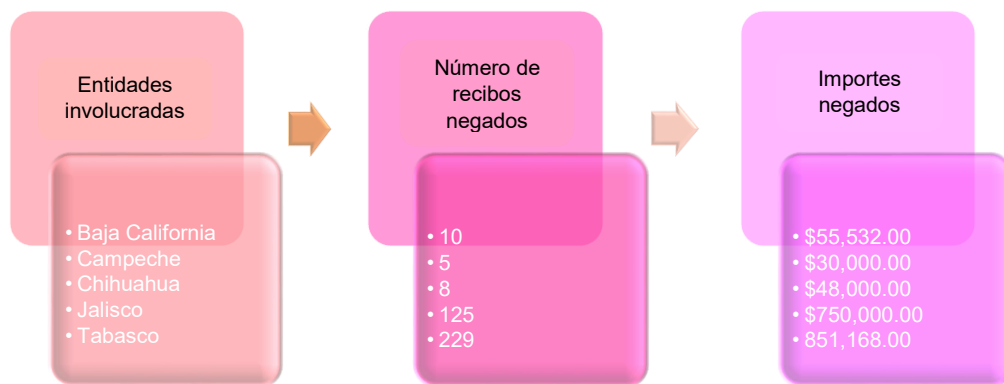
C. Recibos de Reconocimiento por Actividades Políticas en Campaña Federal (REPAP) no reconocidos por los beneficiarios.

En el presente apartado se analizará el destino de los recursos respecto de 377 recibos Reconocimiento por Actividades Políticas “REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA”; y una vez acreditado lo anterior, estar en aptitud de determinar si hubo campañas beneficiadas con los mismos y cuantificarlos al tope de gastos correspondiente a los entonces candidatos involucrados, postulados por la otrora coalición “Movimiento Progresista” durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.

Así pues, como se ha referido una vez examinada la documentación remitida por la Dirección de Auditoría, relativa a los registros y documentación comprobatoria presentada por el Partido de la Revolución Democrática en el marco de la revisión de su Informe Anual correspondiente al ejercicio dos mil doce, se dirigió la línea de investigación a confirmar con los ciudadanos señalados como beneficiarios.

En ese sentido, realizadas las diligencias necesarias para obtener los datos de ubicación de los ciudadanos en comento, se les requirió que confirmaran la suscripción del recibo y la recepción del recurso, asimismo informaran el importe recibido, el detalle de la actividad realizada e identificaran a qué campaña electoral se benefició.

Derivado de lo anterior, del análisis a los escritos de respuesta¹⁹ de los requeridos se advirtió que 377 ciudadanos rechazaron haber suscrito los recibos y negaron la recepción de los recursos por importe de \$1,734,700.00, como se advierte del detalle agregado como **Anexo 1**, para mayor claridad los resultados se grafican a continuación:



Ahora bien, el elemento coincidente entre ellos es la manifestación de los ciudadanos, en relación a que la firma que calza el recibo de reconocimiento por actividades políticas, no fue estampada de su puño y letra, motivo por el cual desconocían dicho recibo y negaron haber recibido el dinero consignado en el mismo.

En virtud de lo anterior, dichas manifestaciones se deberán analizar a la luz de valor indiciario o probatorio que se el Partido de la Revolución Democrática pretende que le sea otorgado a los recibos presentados, considerando cada uno de los elementos con los que cuenta esta autoridad.

Los ciudadanos señalaron que no firmaron el recibo de reconocimiento por actividades política y que no recibieron el dinero, respecto a lo manifestado, debemos puntualizar que se trata de un hecho propio que le consta a quien lo manifiesta, ya que, para ser desplegado, se requiere que se haga de manera personalísima, es decir, el estampar la firma en un documento, es un acto que no puede escapar a la voluntad de cada individuo ni a su realización material.

¹⁹ Los escritos de respuesta de los ciudadanos requeridos y la documentación anexa a los mismos constituyen una documental privada que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

Lo anterior es así, tomando en cuenta que la firma autógrafa hace referencia al signo o rasgo que una persona plasma en un documento con su propio puño y letra, es así que la para la Real Academia Española, es el “nombre y apellido o título que una persona escribe de su propia mano en un documento para darle autenticidad o para expresar que aprueba su contenido”; en virtud de lo anterior, la firma es trazada en el documento escrito por mano propia o de puño y letra de su autor, para obligarse a lo que en él se dice, esto es, es una liga la voluntad en la que el individuo expresa su conocimiento, aprobación, aceptación y obligación con el contenido y forma del documento.

Ahora bien, en ese sentido el examen que realizado hasta este momento nos conduce a tomar en cuenta que la firma cumple un rol predominante en lo que respecta a la teoría de los actos jurídicos, toda vez que dicho rol se encuentra establecido y delimitado por las funciones que la firma manuscrita cumple en la celebración de todo acto jurídico con formalidad escrita.

La teoría en comento señala que la firma cumple tres funciones, como se detalla a continuación:

- Función indicativa, toda vez que sirve para identificar quién es el autor del documento, en el que se encuentra inserta; así pues, su inserción en un instrumento público o privado permite individualizar al sujeto que lo suscribe, dado que cumple con el objetivo de identificar al sujeto que ha elaborado el documento, que ha expresado cierta declaración de voluntad.
- Función declarativa, implica la asunción del contenido del documento por el autor de la firma, toda vez que representa la voluntad de obligarse; ello, permite enlazar el concepto de firma con la voluntad jurídica del agente signante, afirmando que es el trazo peculiar mediante el cual el sujeto consigna el signo que habitualmente lo identifica a fin de hacer constar las manifestaciones de su voluntad.
- Función probatoria, ya que permite acreditar si el autor de la firma es efectivamente aquel que ha sido identificado como tal en el acto que se acredita con la propia firma.

Por consiguiente, la firma implica una presunción de autoría o atribución que surge de relacionar un trazo determinado representativo de una persona con los documentos que la contienen, equivale a la expresión de conformidad y voluntad

respecto del escrito que la antecede, ello no significa, sin embargo, que toda firma o toda rúbrica cumpla con cada función en el mismo grado, pues tal situación dependerá de las circunstancias del caso y del valor jurídico que se le pueda otorgar de acuerdo con la apreciación razonada de aquéllas, dado que pueden existir pruebas en contrario, situación que en la especie aconteció al ser los signantes quienes desconocen la autoría de los recibos materia de análisis.

En ese sentido, la validez probatoria de las firmas que son atribuidas a los ciudadanos implica el análisis de dos elementos esenciales, como son los de integridad y autenticidad, por lo que hace al primero implica que la información no carece de ninguna de sus partes, que no ha sido modificada, dado que es una cualidad imprescindible para otorgar validez jurídica a la información; y el segundo, implica poner a esta declaración de voluntad, íntegra e inalterada, en relación de correspondencia unívoca e indestructible con las partes que la emitieron, de modo tal que no pueda ser negada o repudiada por sus autores.

Situación que trasciende, pues dichos elementos sirven para garantizar que existe una correspondencia e igualdad uniforme con la manifestación de voluntad expresada originalmente por las partes que no hubiere sido impuesta o alterada, en el caso que nos ocupa, la voluntad que trasciende es la del ciudadano presuntamente beneficiado.

En las relatadas condiciones, el cumplimiento de estos presupuestos y elementos esenciales, conlleva a aseverar que en la especie no se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para inferir, en estricta lógica jurídica, la existencia de la voluntad en los recibos repudiados por los ciudadanos.

Derivado de lo anterior, si bien los recibos referidos generaban un indicio sobre la aplicación y destino de los recursos reportados por el Partido, también lo es que esta autoridad se encuentra impelida para otorgarles el valor que el sujeto incoado pretende atribuirles a la luz de las manifestaciones vertidas por los ciudadanos.

Cabe recalcar que, para considerar un documento como medio de prueba, no se debe tener dudas de su autenticidad, dado que un documento, no obstante, de existir jurídicamente, no tendrá valor cognoscitivo alguno si carece de eficacia probatoria, máxime que los documentos privados no gozan de la misma presunción de autenticidad que los instrumentos públicos, a menos que la ley lo dispusiera expresamente.

Así, la carga de la prueba para acreditar que efectivamente cumplió con las obligaciones que le impone la normatividad corría a cargo de los sujetos incoados, ello es así, toda vez que es un imperativo del interés propio de quien tiene sobre sí la carga, dado que se halla compelido implícitamente a realizar el acto previsto por la ley; esto es, su propio interés es el que debe conducirlo a realizar los actos o presentar los documentos necesarios para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones.

En ese sentido, la doctrina²⁰ también señala que cuando un documento fue celebrado o dirigido a un tercero, sin participación de éste, no puede hacerse efectivo atento a que carece de la manifestación de hechos personales; y la misma conclusión se aplica si el instrumento consistiera sólo en una manifestación unilateral de voluntad, si el accionado no tuvo participación en el instrumento, dado que no lo reconoce, y el efecto de su oponibilidad no alcanza para subsanar la omisión en la manifestación de la voluntad.

Que al tratarse de documentos que es posible atribuir a la persona su autoría, ésta tiene la capacidad de desconocerlos, que los ignora o que no le constan y así restarle fuerza probatoria a los mismos y en caso de mediar desconocimiento en cuanto a la autenticidad de documentos ofrecidos como prueba documental, la parte que los ofreció asume la carga de demostrar su autenticidad mediante la producción de la prueba que corresponda.

Lo anterior es así, tomando en cuenta como criterio orientador lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de rubro “HECHOS NEGATIVOS. FORMA EN QUE DEBEN DEMOSTRARSE POR LA PARTE QUE LOS FORMULA CUANDO CON BASE EN ELLOS SUSTENTA UNA ACCIÓN DE INCUMPLIMIENTO (...)” y “HECHOS NEGATIVOS, NO SON SUSCEPTIBLES DE DEMOSTRACIÓN”, en los que se señala que si bien por regla general se establece que el que niega está obligado a probar cuando su negativa cree un elemento constitutivo de su acción; la regla no puede interpretarse literalmente, sino que debe tomarse en consideración la naturaleza tanto de la acción como de los hechos en que se funda, toda vez que sólo puede ser demostrado aquello que existe, mas no así algo que no existe; por ello, sólo aquel que presenta el hecho positivo que da origen al hecho negativo que se reclama, tiene el deber procesal de acreditar la existencia de dicha obligación a efecto de demostrar que el acto se actualizó, mas no así la carga probatoria respecto de la inexistencia del acto en cuestión, ya que

²⁰ Silvia A. Díaz en la obra dirigida por Highton-Areán, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", T. VII, Ed. Hammurabi, Buenos Aires 2007, p. 11.

éste constituye un hecho negativo sustancial que no es susceptible de ser demostrado.

Máxime que en la especie, debe tomarse en consideración que la atribución del acto la realiza el partido al señalar que entregó los recursos a los ciudadanos y que éstos presuntamente firmaron los recibos materia de análisis, lo que se traduce en un hecho positivo, que debe ser demostrado por el sujeto incoado, ya que es éste quien tiene la necesidad y facilidad lógica de acreditar esa situación a efecto de desvirtuar las manifestaciones de los ciudadanos en el sentido de que no recibieron los recursos ni firmaron los recibos.

De lo anterior se desprende, que el partido político era quien tiene la carga de la prueba, considerando la teoría de las cargas probatorias dinámicas que tiene su origen en la necesidad de mesurar la rigidez de las reglas contenidas en los códigos procesales sobre distribución subjetiva de la carga probatoria que, al funcionar como regla de juicio al tiempo de apreciar la prueba en la etapa decisoria, conducían en ocasiones a abstracciones teóricas desconectadas de la realidad o que no se hacían cargo de las particulares circunstancias del caso a resolver. Ocurre que, como advierte Kiper, tradicionalmente se fijaron las reglas de la carga de la prueba de una manera demasiado rígida, sin ningún tipo de miramiento relacionado con las circunstancias particulares del caso. Sin embargo, posteriormente se comenzó a comprobar que la carga probatoria no está indisolublemente unida al rol de actor o de demandado, de tal modo que las consecuencias desfavorables de la falta de acreditación de hechos esenciales pesa sobre la parte que se encuentra en mejores condiciones de aportar la prueba y no lo hizo.

Por consiguiente, atendiendo a las circunstancias de cada caso, la autoridad ante la escasa o nula prueba, puede flexibilizar las reglas generales de la carga probatoria y fallar conforme a las reglas lógica en contra de quien debió probar y no lo hizo, independiente de su calidad en el asunto.

De lo anteriormente señalado, se puede colegir que si bien es cierto, los ciudadanos manifestaron que la firma que calzaba el recibo por actividades políticas, no se estampó de su puño y letra además de no recibir el dinero en el consignado, también lo es que el partido político al estar en una mejor posición de probar que efectivamente entregó a los ciudadanos el recurso y que éstos suscribieron los recibos, no lo hizo, aún teniendo la oportunidad procesal para hacerlo.

El sujeto incoado, fue debidamente emplazado con las constancias que obran en el procedimiento y de las cuales se desprenden todas y cada una de las respuestas

que vertieron los ciudadanos presuntamente beneficiados por los recibos por actividades políticos controvertidos; sin embargo, no presentó elementos que desvirtuaran los señalamientos hechos por los denunciados.

Así pues, tomando en cuenta que los indicios son todo hecho o circunstancia acreditado a través de los medios probatorios, que adquiere significación en su conjunto, que lleva a la autoridad a la certeza en torno a un hecho desconocido, relacionado con la controversia; y que igual que las presunciones, constituyen auxilios probatorios para corroborar o complementar el valor o alcance de los medios de prueba.

Por consiguiente, la valoración de los mismos se realiza para saber si son necesarios, precisos y concordantes, y en virtud de ello, determinar cuál será el mérito que deberá reconocérseles para su convicción respecto a la existencia o no de los hechos alegados y controvertidos en el proceso, obviamente previo examen de todos los requisitos de admisibilidad necesarios para su existencia, validez y eficacia procesal.

En ese sentido, una vez establecida la existencia y autenticidad de cada uno de los elementos e indicios aportados por el sujeto obligado y los ciudadanos involucrados, los argumentos y contraindicios adversos al valor probatorio que el Partido de la Revolución Democrática pretendía que les fueran atribuidos a los “REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA”, se llega a la conclusión de que los recibos presentados por el partido no acreditan el destino de los recursos erogados y reportados por este en su informe Anual correspondiente al ejercicio 2012.

Cabe recalcar que las manifestaciones de los ciudadanos se erigen como pruebas indirectas, que son consideradas idóneas, dentro de los procedimientos electorales, robustece lo anterior el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:

Tesis XXXVII/2004

PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.- La interpretación de los artículos 271, apartado 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 27, apartado 1, inciso e), y 33, apartado 1, del Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con la naturaleza de los

*partidos políticos, llevan a concluir que las pruebas indirectas no sólo se encuentran establecidas como pruebas en el derecho administrativo sancionador electoral, sino que constituyen uno de los principales medios de convicción en los procedimientos que regula. Para arribar a lo anterior, se tiene en cuenta que los partidos políticos llevan a cabo sus actos mediante acciones que no ejecutan de manera directa, por carecer de corporeidad, sino indirectamente, a través de las personas físicas, por lo que en principio y por regla general, los actos que les resulten imputables se deban evidenciar por medios de prueba indirectos, al tener que justificarse primero los actos realizados materialmente por las personas físicas y luego, conforme a las circunstancias de su ejecución, puedan ser atribuibles al partido. Ahora, si bien es cierto que la manera más común de establecer que un acto ha sido efectuado por una persona moral o ente colectivo consiste en demostrar que, para su realización la voluntad de la entidad colectiva fue expresada por una persona física que cuenta con facultades expresas para ese efecto, contenidas en su normatividad interna; sin embargo, la experiencia enseña que cuando se trata de la realización de actos ilícitos no puede esperarse que la participación de la persona jurídica o ente colectivo quede nítidamente expresada a través de los actos realizados por personas físicas con facultades conforme a su normatividad interna, sino por el contrario, que los actos realizados para conseguir un fin que infringe la ley sean disfrazados, seccionados y diseminados a tal grado, que su actuación se haga casi imperceptible, y haga sumamente difícil o imposible, establecer mediante prueba directa la relación entre el acto y la persona. Ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como acontecieron, al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo y lo que se presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que un hecho sucedió de determinada manera, y la manera de llegar a la demostración de la verdad de los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes) y que no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley. Las pruebas indirectas son aquéllas mediante las cuales se demuestra la existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis principal formulada por los enunciados de las partes, hecho secundario del cual es posible extraer inferencias, ofrece elementos de **confirmación** de la hipótesis del hecho principal, pero a través de un paso lógico que va del hecho probado al hecho principal, y el grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la prueba indirecta, dependerá del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario y del grado de aceptación de la inferencia que se obtiene del hecho secundario, esto es, su verosimilitud, que puede llegar, inclusive, a conformar una prueba plena, al obtenerse a través de inferencias o deducciones de los hechos secundarios, en donde el nexo causal (en el caso de los indicios) o el nexo de efecto (en el caso de presunciones) entre el hecho conocido y el desconocido deriva de las circunstancias en que se produzca el primero y*

sirvan para inferir o deducir el segundo. En este orden de ideas, si las pruebas de actividades ilícitas que en un momento determinado realice un partido político, por su naturaleza, rechaza los medios de convicción directos, se concluye que el medio más idóneo que se cuenta para probarlos es mediante la prueba indirecta, al tratarse de medios con los cuales se prueban hechos secundarios que pueden llegarse a conocer, al no formar parte, aunque sí estén relacionados, de los hechos principales que configuran el enunciado del hecho ilícito, respecto de los cuales hay una actividad consciente de ocultarlos e impedir que puedan llegarse a conocer. La circunstancia apuntada no implica que cuando se cuente con pruebas directas, no puedan servir para demostrar los hechos que conforman la hipótesis principal, pues el criterio que se sostiene gira en torno a que, ordinariamente, se cuenta únicamente con pruebas indirectas para acreditar los hechos ilícitos en mención, por lo que necesariamente deben ser admisibles en el procedimiento administrativo sancionador electoral. Lo anterior se robustece si se tiene en cuenta que en los artículos citados se prevén las pruebas indirectas, tanto el indicio como la presunción, aun cuando se menciona sólo a esta última, pues considera que es posible obtener el conocimiento de los hechos mediante un procedimiento racional deductivo o inductivo, y esto último es precisamente lo que doctrinalmente se considera como indicio.

Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

En otro orden de ideas, a fin de determinar si los ciudadanos en comento, tenían algún vínculo de militancia con los partidos se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos a efecto de que verificara si las personas involucradas se encontraban registradas como militantes de alguno de los institutos políticos investigados.

En respuesta a lo anterior, la Dirección en comento remitió una base de consulta del padrón de afiliados que fue entregado por los institutos políticos en la temporalidad investigada, y en relación a los 377 ciudadanos que forman parte del estudio de este apartado, se estableció que 147 tienen un vínculo de militancia con el Partido de la Revolución Democrática, 1 con el Partido del Trabajo, 5 con Movimiento Ciudadano y 224 no están afiliados a los partidos incoados.

Por otra parte, como se ha señalado, se dirigió la línea de investigación a confirmar la dispersión de recursos reportada por el Partido de la Revolución Democrática, por lo que se requirió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a los ciudadanos que cobraron los cheques que presuntamente amparaban el pago de recibos, a la Representación del Partido de la Revolución Democrática ante este Consejo y a los Comités Directivos Estatales del partido en las entidades involucradas, actuaciones que ya fueron analizadas en el apartado precedente, consideraciones que se tienen por aquí transcritas en obvio de repeticiones inútiles.

En las relatadas condiciones, del estudio al cumulo probatorio consistente en las constancias, información y documentación remitida por las autoridades, instituciones políticas y personas físicas, en relación a los recibos que fueron confirmados se arriba a las siguientes conclusiones:

- Que el Partido de la Revolución Democrática emitió cheques en favor de personas que laboraran en los Comités Directivos Estatales en las entidades de Baja California, Campeche, Chihuahua, Jalisco y Tabasco, a fin de que los cobraran y le devolvieran el recurso, para su posterior dispersión en efectivo.
- Que 377 ciudadanos rechazaron haber suscrito los recibos y negaron ser beneficiarios de los importes en ellos consignados.
- Que existen elementos para desestimar la veracidad de 377 recibos “REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA”, por un monto acumulado de \$1,734,700.00.
- Que el Partido de la Revolución Democrática omitió comprobar el destino de recursos reportados en su Informe Anual correspondiente al ejercicio dos mil doce, por un importe de \$1,734,700.00.
- Que no corresponde acumular los egresos a los informes de campañas de los candidatos postulados por la otrora coalición Movimiento Progresista durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012, al no haberse acreditado el destino de los recursos.

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, esta autoridad **no cuenta con elementos** con grado de suficiencia para determinar que el Partido de la Revolución Democrática destino los recursos al pago por concepto de 377 recibos de Reconocimientos por Actividades Políticas para Actividades de Campaña

“REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA”, por un monto de \$1,734,700.00. y que los mismos estén vinculados a la realización de actividades tendentes a la obtención del voto, los que en su caso, debieron ser reportados en el informe de campaña respectivo, cumpliendo con lo previsto en los artículos 83, numeral 1; inciso d); fracción I del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ahora bien, toda vez que no se conoce el destino de la erogación realizada y no se obtuvieron los elementos necesarios para determinar las campañas electorales beneficiadas con el gasto de los 377 recibos Reconocimiento por Actividades Políticas “REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA”, identificados en la columna 44 del **anexo 1**, por un monto \$1,734,700.00. (un millón setecientos treinta y cuatro mil setecientos pesos 00/100 M.N.),

En consecuencia, en atención a los argumentos vertidos en el análisis del presente apartado se concluye que el Partido de la Revolución Democrática incumplió lo dispuesto en el artículo 83, numeral 1, inciso d), fracción IV del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 149 del Reglamento de Fiscalización vigentes al veintitrés de mayo de dos mil catorce; por lo que lo procedente es declarar fundado el procedimiento de mérito respecto al presente apartado.

D. Estudio del probable rebase de tope de gastos de campaña durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.

Por lo que hace al rebase del tope de gastos de campaña, cabe precisar que el procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como, aquellos obtenidos o elaborados por la Unidad de Fiscalización.

Al respecto debe señalarse que de la verificación a los registros realizados por los sujetos incoados, por lo que hace a los ingresos y gastos durante el periodo de campaña del Proceso Electoral Federal 2011-2012, se constató la cuantificación dictaminada por la autoridad electoral en el marco de la revisión del informe de campaña de los candidatos al cargo de Senador en las entidades referidas; en este contexto, de conformidad con el anexo A del Dictamen Consolidado identificado como INE/CG792/2015 aprobado en sesión extraordinaria celebrada el doce de agosto de dos mil quince, por el Consejo General de este Instituto, así como de las

**CONSEJO GENERAL
P-UFRPP 60/13**

diversas resoluciones y acatamientos emitidos por esta autoridad, se determinó que las cifras totales dictaminadas relativas a los informes en comento, correspondieron a:

Estado	Candidato	Total de gastos determinados por Auditoría con Acatamientos y Resoluciones (A)	Tope de Gastos ACUERDO CG433/2011 (B) (A)-(B)	Diferencia (C) (A)-(B)=C
Baja California	Blasquez Salinas Marco Antonio	\$2,335,761.88	\$8,962,988.91	-\$6,627,227.03
	Calderón Guillen Marina Manuela	\$1,668,302.52	\$8,962,988.91	-\$7,294,686.39
Campeche	Cutz Can Gaspar Alberto	\$1,475,496.58	\$2,240,747.23	-\$765,250.65
Chihuahua	Quintana Silveyra Víctor Manuel	\$2,101,915.67	\$10,083,362.52	-\$7,981,446.85
	Borunda Lara Patricia	\$1,601,920.54	\$10,083,362.52	-\$8,481,441.98
Jalisco	Lomeli Bolaños Carlos	\$4,567,040.47	\$21,287,098.66	-\$16,720,058.19
	Garaiz Izarra Esteban Mario	\$1,887,060.93	\$21,287,098.66	-\$19,400,037.73
Tabasco	López Hernández Adán Augusto	\$2,248,184.74	\$6,722,241.68	-\$4,474,056.94
	Mayans Canabal Fernando Enrique	\$1,409,218.65	\$6,722,241.68	-\$5,313,023.03

En tal sentido, se ordena **cuantificar** el monto determinado en el considerando 3, apartados A y B de la presente Resolución, por concepto de pago de reconocimiento un importe de **\$1,485,532.00** al tope de gastos de campaña de los candidatos **en comento**, en el marco del Proceso Electoral Federal aludido.

En virtud de lo anterior, las cifras totales relativas al periodo de campaña de los entonces candidatos correspondieron a:

Estado	Cargo	Cifras determinadas por Auditoría con Acatamientos y Resoluciones	Gastos a sumar Resolución P-UFRPP 60/13	Total de gastos determinados por Auditoría con Acatamientos y Resoluciones (A)	Tope de Gastos ACUERDO CG433/2011 (B) (A)-(B)	Diferencia (C) (A)-(B)=C
Baja California	Senador	\$2,335,761.88	\$32,950.00	\$2,368,711.88	\$8,962,988.91	\$6,594,277.03
	Senadora	\$1,668,302.52	\$32,950.00	\$1,701,252.52	\$8,962,988.91	\$7,261,736.39
Campeche	Senador	\$1,475,496.58	\$150,000.00	\$1,625,496.58	\$2,240,747.23	\$615,250.65
Chihuahua	Senador	\$2,101,915.67	\$148,000.00	\$2,249,915.67	\$10,083,362.52	\$7,833,446.85
	Senadora	\$1,601,920.54	\$148,000.00	\$1,749,920.54	\$10,083,362.52	\$8,333,441.98
Jalisco	Senador	\$4,567,040.47	\$141,000.00	\$4,708,040.47	\$21,287,098.66	\$16,579,058.19
	Senador	\$1,887,060.93	\$141,000.00	\$2,028,060.93	\$21,287,098.66	\$19,259,037.73
Tabasco	Senador	\$2,248,184.74	\$345,816.00	\$2,594,000.94	\$6,722,241.68	\$4,128,240.94
	Senador	\$1,409,218.65	\$345,816.00	\$1,755,034.65	\$6,722,241.68	\$4,967,207.03
Total			\$1,485,532.00			

Visto lo precedente, como se advierte del cuadro anterior los entonces candidatos a senadores, presentaron una diferencia contra el tope de gastos de campaña, por lo que en este sentido considerando los argumentos vertidos en la resolución de mérito, no se advierte un incumplimiento en materia de tope de gastos de campaña.

6. Individualización de la sanción. Ahora bien, toda vez que en el considerando 3, apartado C, se ha analizado una conducta que violenta el artículo 149 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización; se procede a hacer la individualización de la sanción atento a las particularidades que en el caso se presentan.

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a) Valor protegido o trascendencia de la norma.
- b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto.
- c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.
- d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
- e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
- f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.
- g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
- h) La capacidad económica del sujeto infractor.

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente

corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En este sentido, para imponer la sanción, este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del Partido Político Nacional de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad analizada en el considerando 5, apartado C, se identificó que el Partido de la Revolución Democrática omitió comprobar sus egresos realizados durante el ejercicio 2012.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del partido, consistente en haber incumplido con su obligación de comprobar los gastos realizados durante el ejercicio 2012, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

Modo: El Partido de la Revolución Democrática reportó diversos egresos relativos a gastos realizados durante el ejercicio 2012; sin embargo, no presentó la documentación comprobatoria que acredite el gasto realizado y por tanto no se

comprobó la erogación y el destino de los recursos públicos por un importe de \$1,734,700.00; incumpliendo con el artículo 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

Tiempo: La irregularidad atribuida al partido surgió del estudio de lo reportado por el sujeto obligado en el Informe Anual sobre el origen y destino de los recursos correspondiente al ejercicio 2012.

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Unidad de Fiscalización, ubicadas en Avenida Acoxpa número 436, Colonia Exhacienda de Coapa, Delegación Tlalpan, C.P. 14300, entonces Distrito Federal.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del partido para obtener el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del instituto político para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de Partidos Políticos Nacionales, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por la omisión de presentar ante la autoridad fiscalizadora, la documentación comprobatoria de los gastos realizados a lo largo del ejercicio 2012.

Así las cosas, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien, impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el partido de mérito viola los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la

sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos.

En la conducta materia de análisis el partido en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización²¹ el cual tutela el principio de certeza en uso de los recursos que deben de prevalecer en los procesos federales electorales, al establecer con toda claridad que los partidos políticos tiene las siguientes obligaciones: registrar contablemente sus egresos, soportar todos los egresos con documentación original que se expedirá a nombre del sujeto obligado, por parte de la persona a quien el partido efectuó el pago y entregar la documentación antes mencionada con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables, entre otras.

Ahora bien, dicho precepto legal, regula diversas obligaciones por parte de los institutos políticos, sin embargo por lo que respecta a la norma vulnerada en el presente apartado, es de señalarse que el partido deberá presentar la documentación comprobatoria que acredite que el egreso realizado posee un destino acorde con el objeto del partido político, esto con la finalidad de inhibir conductas ilícitas y contar con la transparencia del origen de los recursos utilizados para las actividades de los entes políticos.

En este tenor, es que se establece la obligación de los institutos políticos a presentar de manera clara y veraz la documentación que acredite la relación comercial entre los proveedores y/o prestadores de servicios, lo cual permite que exista un control de los egresos realizados por el ente político. Dicho de otra manera con la presentación de la documentación reconoce el gasto realizado y permite un estudio del mismo para verificar que no existe ilicitud en el objeto, motivo o fin del mismo.

Por lo que respecta a las conductas que se estudian, se debe señalar que si bien, puede asimilarse con un egreso no reportado, la diferencia principal radica en que del egreso no comprobado, la autoridad electoral tiene conocimiento, pues, fue reportado ante la autoridad fiscalizadora, pero en su caso no se comprobó dicho gasto en su totalidad o el partido no presentó la información soporte que permitiera

²¹ “**Artículo 149.** 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original que expida a nombre del partido, agrupación, organizaciones de observadores u organización de ciudadanos, la persona a quien se efectuó el pago. Dicha documentación deberá cumplir con todos los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables, con excepción de lo señalado en los artículos 164, 166 al 168 del Reglamento.(...)”

considerar esa información como válida, pues, no se cuenta con elementos que permita determinar o validar el gasto; por tal motivo es que la conducta aquí estudiaba vulneró el principio de certeza en el uso de los recursos.

Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales de rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera tal que tenga por objeto acreditar lo reportado, es inhibir conductas ilícitas que tengan por objeto y/o resultado de garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los partidos políticos y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den conductas infractoras que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la norma, lo cual vulneraría el Estado de Derecho.

En ese entendido, el Partido incumplió con su obligación de comprobar diversas erogaciones realizadas en el ejercicio sujeto a revisión; obligación que emana del Reglamento de Fiscalización, el cual tutela la certeza en el uso de los recursos públicos de los partidos políticos, mismos que tienden a evitar que por la omisión de comprobar los gastos realizados, se presenten conductas que vayan en contra de la normatividad electoral.

De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el ejercicio en revisión se dio a los recursos que hayan recibido los partidos políticos, de determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente las sanciones que correspondan.

Ahora bien, no se pasa por alto que la comprobación de los gastos realizados por el citado partido, trae aparejada la omisión por parte del mismo, respecto a la identificación de los egresos. Así, es que los egresos no comprobados son un incumplimiento directo del partido del deber de certeza del uso y aplicación de los recursos al que se encuentran sujetos.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el partido se ubica dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 149 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela de del principio de certeza en el uso de los recursos de los partidos políticos tutelados por la Constitución.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto debe tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta.

Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.

En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración al supuesto contenido en la norma.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro

al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas infracciones son siempre de resultado.

En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada la conducta.

En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por la conducta señalada en el considerando 5, apartado C, es garantizar la certeza en el uso de los recursos principio que debe imperar en la conducta de los partidos políticos en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad imputable al Partido Político Nacional, se traducen en infracciones de resultado que ocasionan un daño directo y real del bien jurídico tutelado, consistente en cumplir con su obligación de comprobar los gastos ejercidos durante el periodo fiscalizado.

Así es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en la omisión de comprobar los gastos realizados durante el ejercicio en comento, cuyo objeto infractor concurre directamente en tener certeza en la rendición de los recursos erogados por el partido.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los partidos políticos.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues partido cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO** o de **FONDO**, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 342, numeral 1, inciso I) del Código Electoral Federal, lo procedente es imponer una sanción.

Calificación de la falta

Para la calificación de la falta, resulta necesario tener presente las siguientes consideraciones:

- Que se trata de una falta sustantiva o de fondo, toda vez que el partido político impidió a la autoridad fiscalizadora tener certeza sobre el uso de los recursos erogados al no presentar la documentación comprobatoria que acredite los gastos realizados y por tanto no se comprobó la erogación y el destino de los recursos.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización; esto es, certeza en el uso y destino de los recursos.
- Que se advierte la omisión de dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas en las disposiciones aplicables en la materia.
- Que la conducta fue singular.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

1. Calificación de la falta cometida.

Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por partido se califica como **GRAVE ORDINARIA**.

Lo anterior es así, en razón de que se tratan de faltas de fondo o sustantivas en las que se vulnera directamente el principio de certeza en el uso de los recursos del partido, toda vez que el partido omitió comprobar los gastos realizados durante el ejercicio 2012, considerando que el bien jurídico tutelado por la norma transgredida es de relevancia para el buen funcionamiento de la actividad fiscalizadora y la correcta comprobación del uso de los recursos de los partidos políticos.

En ese contexto, el partido debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las normas a que se han hecho referencia.

2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por las irregularidades que desplegó el partido político y si ocasionó un menoscabo en los valores jurídicamente tutelados.

Debe considerarse que el hecho de que partido no cumpla con su obligación de comprobar con la documentación soporte los gastos que realizó durante un periodo establecido, impidió que la autoridad electoral conociera con plena certeza el modo en que el partido utilizó diversos recursos. Por lo tanto, no debe perderse de vista que la conducta descrita vulnera directamente el principio de certeza en el uso de los recursos con que cuenta el partido político.

En ese tenor, la falta cometida por el partido es sustantiva y el resultado lesivo es significativo, toda vez que omitió presentar aquella documentación soporte que justificara egresos realizados durante el ejercicio 2012, situación que, como ya ha quedado expuesto, vulnera el principio de certeza en el uso de los recursos.

3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el partido no es reincidente respecto de las conductas que aquí se han analizado.

Imposición de la sanción.

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

En esta tesitura, debe considerarse que el partido político cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así, mediante el Acuerdo **CG339/2017** emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2018 un total de **\$496,199,686 00/100 M.N.**)

En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA				
Deducción	Ámbito	Importe total	Importe mensual a deducir	Saldo
INE/CG217/2014-TERCERO-i)-97	FEDERAL	\$15,745,201.00	\$492,064.68	\$3,729,655.23
INE/CG771/2015-TERCERO-e)-14	FEDERAL	\$1,205,291.60	\$37,214.98	\$235,900.41
INE/CG771/2015-DECIMO SEGUNDO-b)-15	FEDERAL	\$2,068,308.31	\$66,159.10	\$344,950.00
INE/CG260/2018-TERCERO-a)-7 faltas formales	FEDERAL	\$5,284.30	\$5,284.30	\$0.00
INE/CG260/2018-TERCERO-b)-1	FEDERAL	\$10,946.05	\$10,946.05	\$0.00
INE/CG260/2018-TERCERO-c)-4	FEDERAL	\$5,284.30	\$5,284.30	\$0.00
INE/CG260/2018-TERCERO-c)-9	FEDERAL	\$18,117.60	\$18,117.60	\$0.00
INE/CG260/2018-TERCERO-d)-5	FEDERAL	\$1,188,967.50	\$1,188,967.50	\$0.00

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA				
Deducción	Ámbito	Importe total	Importe mensual a deducir	Saldo
INE/CG260/2018 -TERCERO-d)-10	FEDERAL	\$958,723.00	\$958,722.41	\$0.59
INE/CG260/2018 -TERCERO-e)-8	FEDERAL	\$23,930.33	\$23,930.33	\$0.00
INE/CG260/2018 -TERCERO-e)-13	FEDERAL	\$6,039.20	\$6,039.20	\$0.00
INE/CG260/2018 -TERCERO-e)-18	FEDERAL	\$3,321.56	\$3,321.56	\$0.00
INE/CG260/2018 -TERCERO-e)-19	FEDERAL	\$64,694.93	\$64,694.93	\$0.00
INE/CG260/2018 -TERCERO-g)-16	FEDERAL	\$198,312.33	\$198,312.33	\$0.00
SM-JDC-123/2018-SEGUNDO	FEDERAL	\$12,090.00	\$12,090.00	\$0.00
SRE-PSC-82/2018-CUARTO	FEDERAL	\$44,330.80	\$44,330.80	\$0.00
INE/CG353/2018 -SEGUNDO-b)-1	LOCAL / TAMAULIPAS	\$1,237,882.91	\$0.93	\$0.00
Total:		\$22,796,725.72	\$3,135,481.00	\$4,310,506.23

Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al Partido por este Consejo General, así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones:

De lo anterior, se advierte que el Partido de la Revolución Democrática tiene un saldo pendiente de \$4,310,506.23 (cuatro millones trescientos diez mil quinientos seis pesos 23/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.

Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción.

No sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los Partidos Políticos Nacionales, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Por lo anterior, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el partido político, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el partido político conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe Anual.
- El Partido Político Nacional no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$1,734,700.00 (un millón setecientos treinta y cuatro mil setecientos pesos 00/100 M.N.).

- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó singularidad en la conducta cometida por el partido político.

Por lo anterior este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquella que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso.

Así pues, la Sala Superior sostuvo en la sentencia recaída al recurso de apelación SUP-RAP-461/2012 que las faltas deben traer consigo una consecuencia suficiente para que en lo futuro, tanto individuos que conforman la sociedad en general, como el partícipe de un ilícito, no cometan nuevos y menos las mismas violaciones a la ley, pues con ello se expondría el bienestar social, como razón última del Estado de Derecho.

Esto es, la intervención Estatal debe ser lo suficientemente apta para desalentar al infractor de continuar en su oposición a la ley, ya que, de otra manera, incluso, podría contribuir al fomento de tales conductas ilícitas, y no quedaría satisfecho el propósito disuasivo que está en la naturaleza misma de las sanciones.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 354, numeral 1, inciso a), fracciones I y II del ordenamiento citado no son aptas para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del Partido Político Nacional infractor, una amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, serían poco idóneas para disuadir las conductas infractoras como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

Las sanciones contempladas en las fracciones IV y V no son aplicables a la materia competencia del presente procedimiento.

Asimismo, la sanción contenida en la fracción VI consistente en la cancelación del registro como partido político se estima aplicable cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente político sancionado del sistema existente.

En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el Partido se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso²².

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos objetivos que rodean la irregularidad analizada, se llegó a la conclusión de que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta de omitir registrar el gasto y las normas infringidas [83, numeral 1, inciso b), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización], la singularidad y el objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al partido, en razón **de la trascendencia de las normas trasgredidas al omitir comprobar el egreso**, lo cual ya ha sido analizado en el apartado correspondiente de esta Resolución, es una sanción económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado que asciende a un total de \$1,734,700.00 (un millón setecientos treinta y cuatro mil setecientos pesos 00/100 M.N.)²³

²² Cfr. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó en el recurso de apelación SUP-RAP-257/2008, que cuando con la conducta imputada se obtenga un beneficio económico la sanción debe incluir, por lo menos, el monto beneficiado; en el caso concreto la sanción debe corresponder a aquella que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso.

²³ Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final puede presentar una variación derivado de la conversión a días de salario mínimo.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido de la Revolución Democrática, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$1,734,700.00 (un millón setecientos treinta y cuatro mil setecientos pesos 00/100 M.N.).**

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 355, numeral 5, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara **fundado** el procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, en los términos de lo expuesto en el **Considerando 5 apartados A y B.**

SEGUNDO. Se acumula la cantidad de \$1,485,532.00 (**un millón cuatrocientos ochenta y cinco mil quinientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.**) monto establecido por esta autoridad, a los saldos principales determinados durante los procesos de fiscalización correspondientes a los entonces candidatos postulados por la otrora coalición “Movimiento Progresista” durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012, que fueron beneficiados, en los términos señalados en el **Considerando 5, apartado D.**

TERCERO. Se declara **fundado** el procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido de la Revolución Democrática, en los términos de lo expuesto en el **Considerando 5 apartado C.**

CUARTO. En términos del **Considerando 6** de la presente Resolución, se impone al **Partido de la Revolución Democrática**, una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto **Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes**, hasta alcanzar la cantidad de **\$1,734,700.00 (un millón setecientos treinta y cuatro mil setecientos pesos 00/100 M.N.).**

QUINTO. Notifíquese la presente Resolución.

SEXTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los artículos 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No.	CIUDADANO	C.V.E. ELECTOR	FOLIO	IMPORTE	DÍA	ESTACIÓN	DOMICILIO	DIRECCIÓN JURÍDICA				SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES				INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUNDO SOCIAL				DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES				DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL				COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD							
								OFICIO DEL SOLICITANTE	FECHA DEL OFICIO	OFICIO DE RESPUESTA	FECHA DEL OFICIO	OFICIO DEL SOLICITANTE	FECHA DEL OFICIO	OFICIO DE RESPUESTA	FECHA DEL OFICIO	OFICIO DEL SOLICITANTE	FECHA DEL OFICIO	OFICIO DE RESPUESTA	FECHA DEL OFICIO	OFICIO DEL SOLICITANTE	FECHA DEL OFICIO	OFICIO DE RESPUESTA	FECHA DEL OFICIO	OFICIO DEL SOLICITANTE	FECHA DEL OFICIO	OFICIO DE RESPUESTA	FECHA DEL OFICIO	OFICIO DEL SOLICITANTE	FECHA DEL OFICIO	OFICIO DE RESPUESTA	FECHA DEL OFICIO	OFICIO DEL SOLICITANTE	FECHA DEL OFICIO	OFICIO DE RESPUESTA	FECHA DEL OFICIO	OFICIO DEL SOLICITANTE	FECHA DEL OFICIO	OFICIO DE RESPUESTA	FECHA DEL OFICIO
149	Edgar Ulises Vilalaz Luján Coahuila	010105010720144 900	300	#####	18	Jalisco	C. Patrocin 212, Faseo Colores Alameda, C.P. 48900, Aguila de Navarro, Jalisco.	OFICIO DEL SOLICITANTE (11)	FECHA DEL OFICIO (10)	OFICIO DE RESPUESTA (10)	FECHA DEL OFICIO (9)				OFICIO DEL SOLICITANTE (13)	FECHA DEL OFICIO (13)	OFICIO DE RESPUESTA (14)	FECHA DEL OFICIO (14)	OFICIO DEL SOLICITANTE (15)	FECHA DEL OFICIO (15)	OFICIO DE RESPUESTA (16)	FECHA DEL OFICIO (16)	OFICIO DEL SOLICITANTE (17)	FECHA DEL OFICIO (17)	OFICIO DE RESPUESTA (18)	FECHA DEL OFICIO (18)	OFICIO DEL SOLICITANTE (19)	FECHA DEL OFICIO (19)	OFICIO DE RESPUESTA (20)	FECHA DEL OFICIO (20)	OFICIO DEL SOLICITANTE (21)	FECHA DEL OFICIO (21)	OFICIO DE RESPUESTA (22)	FECHA DEL OFICIO (22)					
150	Rogelio Vilalaz Barahila	010105010720144 100	301	#####	18	Jalisco	C. Lando de Tejeda número 214, Faseo, Jardines de Aguila, C.P. 48900, Aguila de Navarro, Jalisco.	OFICIO DEL SOLICITANTE (11)	FECHA DEL OFICIO (10)	OFICIO DE RESPUESTA (10)	FECHA DEL OFICIO (9)				OFICIO DEL SOLICITANTE (13)	FECHA DEL OFICIO (13)	OFICIO DE RESPUESTA (14)	FECHA DEL OFICIO (14)	OFICIO DEL SOLICITANTE (15)	FECHA DEL OFICIO (15)	OFICIO DE RESPUESTA (16)	FECHA DEL OFICIO (16)	OFICIO DEL SOLICITANTE (17)	FECHA DEL OFICIO (17)	OFICIO DE RESPUESTA (18)	FECHA DEL OFICIO (18)	OFICIO DEL SOLICITANTE (19)	FECHA DEL OFICIO (19)	OFICIO DE RESPUESTA (20)	FECHA DEL OFICIO (20)	OFICIO DEL SOLICITANTE (21)	FECHA DEL OFICIO (21)	OFICIO DE RESPUESTA (22)	FECHA DEL OFICIO (22)					
151	Alfonso Vidro Carrillo	010105010720144 900	302	#####	18	Jalisco	C. Camagüey número 215, Loc. Aguila de Navarro, C.P. 48900, Aguila de Navarro, Jalisco.	OFICIO DEL SOLICITANTE (11)	FECHA DEL OFICIO (10)	OFICIO DE RESPUESTA (10)	FECHA DEL OFICIO (9)				OFICIO DEL SOLICITANTE (13)	FECHA DEL OFICIO (13)	OFICIO DE RESPUESTA (14)	FECHA DEL OFICIO (14)	OFICIO DEL SOLICITANTE (15)	FECHA DEL OFICIO (15)	OFICIO DE RESPUESTA (16)	FECHA DEL OFICIO (16)	OFICIO DEL SOLICITANTE (17)	FECHA DEL OFICIO (17)	OFICIO DE RESPUESTA (18)	FECHA DEL OFICIO (18)	OFICIO DEL SOLICITANTE (19)	FECHA DEL OFICIO (19)	OFICIO DE RESPUESTA (20)	FECHA DEL OFICIO (20)	OFICIO DEL SOLICITANTE (21)	FECHA DEL OFICIO (21)	OFICIO DE RESPUESTA (22)	FECHA DEL OFICIO (22)					

[illegible]

[illegible]

No.	C.I.	C.I.E	C.I.E	FOLIO	DÍA	ESTADO	DOMICILIO	DIRECCIÓN JURÍDICA			SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES			INSTITUTO REGISTRARIO DEL REGISTRO SOCIAL			DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES			DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E INVESTIGACIÓN PERSONAL			COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD		
								OFICIO	FECHA	OFICIO	FECHA	OFICIO	FECHA	OFICIO	FECHA	OFICIO	FECHA	OFICIO	FECHA	OFICIO	FECHA	OFICIO	FECHA	OFICIO	FECHA	OFICIO	FECHA	OFICIO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
166	Alajalón	ORSGA7206294H	407	17	Jalisco	C. Vicente Guerrero número 76, Loc. Matamoros, C.P. 46450, Zapotlán, Jalisco.																						
167	Luis Rodrigo Sosa Ortiz	SLORLS890914H	408	9	Jalisco	C. Puerto Yareno número 572, Col. Circunvalación Beltrano, C.P. 44330, Guadalajara, Jalisco.																						
170	Miriam Ramirez Sanchez	MRSMR820617H	411	9	Jalisco	C. Salazar número 6833, Col. Inf. Estado, C.P. 44300, Guadalajara, Jalisco.																						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3449

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3467

No. (1)	CUIDADANO (2)	CVE ELECTOR (3)	FOLIO (4)	IMPORTE (5)	ESTACION (6)	DOMICILIO (8)	DIRECCION JURIDICA				SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES				INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUNDO SOCIAL				DIRECCION EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES				DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACION E IDENTIFICACION PERSONAL				COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							OFICIO SOLICITUD (9)	FECHA OFICIO (10)	OFICIO DEL SOLICITUD (11)	FECHA OFICIO (12)	OFICIO RESPUESTA (13)	FECHA OFICIO (14)	OFICIO DEL SOLICITUD (15)	FECHA OFICIO (16)	OFICIO RESPUESTA (17)	FECHA OFICIO (18)	OFICIO DEL SOLICITUD (19)	FECHA OFICIO (20)	OFICIO RESPUESTA (21)	FECHA OFICIO (22)	OFICIO DEL SOLICITUD (23)	FECHA OFICIO (24)	OFICIO RESPUESTA (25)	FECHA OFICIO (26)	OFICIO DEL SOLICITUD (27)	FECHA OFICIO (28)	OFICIO RESPUESTA (29)	FECHA OFICIO (30)	OFICIO DEL SOLICITUD (31)	FECHA OFICIO (32)	OFICIO RESPUESTA (33)	FECHA OFICIO (34)	OFICIO DEL SOLICITUD (35)	FECHA OFICIO (36)	OFICIO RESPUESTA (37)	FECHA OFICIO (38)	OFICIO DEL SOLICITUD (39)	FECHA OFICIO (40)	OFICIO RESPUESTA (41)	FECHA OFICIO (42)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
245	Fabiola Villalobos Jimenez	VLJAFBIZ101814M000	6392	#####	17	Jalisco	C. Morales Alvarado 119, Barrio Santa Teresita, C.P. 45500, Zapotlanero, Jalisco.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No.	C.I.	C.I.E	FOLIO	IMPORTE	ESTADO	DOMICILIO	DIRECCION JURIDICA			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES			INSTITUTO MEXICANO DEL REGISTRO SOCIAL			DIRECCION EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES			DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACION E INVESTIGACION PERSONAL			COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD		
							ORIGEN	FECHA DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	ORIGEN	FECHA DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	ORIGEN	FECHA DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	ORIGEN	FECHA DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	ORIGEN	FECHA DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	ORIGEN	FECHA DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA	ORIGEN	FECHA DEL OFICIO	FECHA DE RESPUESTA
296	Eda Maria Juarez Palma	090	3131	###	1	Elm. Jacarero s/n. Cd. Elto Jacarero. C.P. 89501. Salcam. Tabasco	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
297	Carlos Manuel Cisneros Ruiz	090	3132	###	2	C. Francisco Ungarzo. Mza. 14, Lt. 10, Fraccionamiento Tierra y Libertad. C.P. 86951. Emiliano Zapata, Tabasco.	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
298	Marissa del Carmen Rubio Andrade	090	3133	###	1	C. Francisco Ungarzo s/n. Fraccionamiento Tierra y Libertad. C.P. 86951. Emiliano Zapata, Tabasco.	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)

[illegible]

No. (1)	CIUDADANO (2)	CVE ELECTOR (3)	FOLIO (4)	IMPORTE (5)	DÍAS (6)	ESTACIÓN (7)	DOMICILIO (8)	DIRECCIÓN JURÍDICA				SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES				INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUNDO SOCIAL				DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL				COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SALUD				
								OFICIO DEL SOLICITUD (9)	FECHA DEL OFICIO DEL RESPUESTA (10)	FECHA DEL OFICIO (11)	OFICIO DEL RESPUESTA A (12)	FECHA DEL OFICIO (13)	OFICIO DEL RESPUESTA (14)	FECHA DEL OFICIO (15)	OFICIO DEL SOLICITUD (16)	FECHA DEL OFICIO (17)	OFICIO DEL RESPUESTA (18)	FECHA DEL OFICIO (19)	OFICIO DEL SOLICITUD (20)	FECHA DEL OFICIO (21)	OFICIO DEL SOLICITUD (22)	FECHA DEL OFICIO (23)	OFICIO DEL RESPUESTA (24)	FECHA DEL OFICIO (25)	OFICIO DEL SOLICITUD (26)	FECHA DEL OFICIO (27)	OFICIO DEL RESPUESTA (28)	FECHA DEL OFICIO (29)	OFICIO DEL SOLICITUD (30)	FECHA DEL OFICIO (31)	OFICIO DEL RESPUESTA (32)	FECHA DEL OFICIO (33)
132	Elisa del Carmen Navarro Cruz	NT0REL1Z101127M 100	3163	#####	1	Tlalisco o	C. Gregorio Méndez s/n. Joruta, C.P. 88781, Joruta, Tabasco.	FECHA DEL OFICIO (9)	OFICIO DEL RESPUESTA (10)	FECHA DEL OFICIO (11)	OFICIO DEL RESPUESTA A (12)	FECHA DEL OFICIO (13)	OFICIO DEL RESPUESTA (14)	FECHA DEL OFICIO (15)	OFICIO DEL SOLICITUD (16)	FECHA DEL OFICIO (17)	OFICIO DEL RESPUESTA (18)	FECHA DEL OFICIO (19)	OFICIO DEL SOLICITUD (20)	FECHA DEL OFICIO (21)	OFICIO DEL SOLICITUD (22)	FECHA DEL OFICIO (23)	OFICIO DEL RESPUESTA (24)	FECHA DEL OFICIO (25)	OFICIO DEL SOLICITUD (26)	FECHA DEL OFICIO (27)	OFICIO DEL RESPUESTA (28)	FECHA DEL OFICIO (29)	OFICIO DEL SOLICITUD (30)	FECHA DEL OFICIO (31)	OFICIO DEL RESPUESTA (32)	FECHA DEL OFICIO (33)
133	Guillermo López Jiménez	SPJAS0810131527 M000	3164	#####	1	Tlalisco o	C. Manuel Elías Ruiz 303, Col. Centro, C.P. 88781, Joruta, Tabasco.	FECHA DEL OFICIO (9)	OFICIO DEL RESPUESTA (10)	FECHA DEL OFICIO (11)	OFICIO DEL RESPUESTA A (12)	FECHA DEL OFICIO (13)	OFICIO DEL RESPUESTA (14)	FECHA DEL OFICIO (15)	OFICIO DEL SOLICITUD (16)	FECHA DEL OFICIO (17)	OFICIO DEL RESPUESTA (18)	FECHA DEL OFICIO (19)	OFICIO DEL SOLICITUD (20)	FECHA DEL OFICIO (21)	OFICIO DEL SOLICITUD (22)	FECHA DEL OFICIO (23)	OFICIO DEL RESPUESTA (24)	FECHA DEL OFICIO (25)	OFICIO DEL SOLICITUD (26)	FECHA DEL OFICIO (27)	OFICIO DEL RESPUESTA (28)	FECHA DEL OFICIO (29)	OFICIO DEL SOLICITUD (30)	FECHA DEL OFICIO (31)	OFICIO DEL RESPUESTA (32)	FECHA DEL OFICIO (33)
134	Eugenio Velázquez Palma	NLAES0600027M 900	3165	#####	1	Tlalisco o	C. Federico Álvarez vial 22, Col Centro, C.P. 88780, Joruta, Tabasco.	FECHA DEL OFICIO (9)	OFICIO DEL RESPUESTA (10)	FECHA DEL OFICIO (11)	OFICIO DEL RESPUESTA A (12)	FECHA DEL OFICIO (13)	OFICIO DEL RESPUESTA (14)	FECHA DEL OFICIO (15)	OFICIO DEL SOLICITUD (16)	FECHA DEL OFICIO (17)	OFICIO DEL RESPUESTA (18)	FECHA DEL OFICIO (19)	OFICIO DEL SOLICITUD (20)	FECHA DEL OFICIO (21)	OFICIO DEL SOLICITUD (22)	FECHA DEL OFICIO (23)	OFICIO DEL RESPUESTA (24)	FECHA DEL OFICIO (25)	OFICIO DEL SOLICITUD (26)	FECHA DEL OFICIO (27)	OFICIO DEL RESPUESTA (28)	FECHA DEL OFICIO (29)	OFICIO DEL SOLICITUD (30)	FECHA DEL OFICIO (31)	OFICIO DEL RESPUESTA (32)	FECHA DEL OFICIO (33)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No.	CIUDADANO (2)	CVE ELECTOR (3)	FOLIO (4)	IMPORTE (5)	ESTADO (6)	DOMICILIO (8)	DIRECCION JURIDICA				SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES				INSTITUTO REGISTRARIO DEL REGISTRO SOCIAL				DIRECCION EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES				DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACION E IDENTIFICACION PERSONAL				COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							FECHA DEL OFICIO (9)	FECHA DEL OFICIO (10)	FECHA DEL OFICIO (11)	FECHA DEL OFICIO (12)	FECHA DEL OFICIO (13)	FECHA DEL OFICIO (14)	FECHA DEL OFICIO (15)	FECHA DEL OFICIO (16)	FECHA DEL OFICIO (17)	FECHA DEL OFICIO (18)	FECHA DEL OFICIO (19)	FECHA DEL OFICIO (20)	FECHA DEL OFICIO (21)	FECHA DEL OFICIO (22)	FECHA DEL OFICIO (23)	FECHA DEL OFICIO (24)	FECHA DEL OFICIO (25)	FECHA DEL OFICIO (26)	FECHA DEL OFICIO (27)	FECHA DEL OFICIO (28)	FECHA DEL OFICIO (29)	FECHA DEL OFICIO (30)	FECHA DEL OFICIO (31)	FECHA DEL OFICIO (32)	FECHA DEL OFICIO (33)	FECHA DEL OFICIO (34)	FECHA DEL OFICIO (35)	FECHA DEL OFICIO (36)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
419	Luisito Alejandro Dela Cruz	ALCR-03110027M	3254	#####	2	Tlaxaco o Cardenas, Tlaxaco.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No. (1)	CIUDADANO (2)	CVE ELECTOR (3)	FOLIO (4)	IMPORTE (5)	DÍAS (6)	ESTADO (7)	DOMICILIO (8)	DIRECCIÓN JURÍDICA				SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES				INSTITUTO REGISTRARIO DEL REGISTRO SOCIAL				DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES				DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL				COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD			
								OFICIO DEL SOLICITUD (9)	FECHA DEL OFICIO (9)	OFICIO DE RESPUESTA (10)	FECHA DEL OFICIO (10)	OFICIO DEL SOLICITUD (11)	FECHA DEL OFICIO (11)	OFICIO A RESPUESTA (12)	FECHA DEL OFICIO (12)	OFICIO DEL SOLICITUD (13)	FECHA DEL OFICIO (13)	OFICIO DE RESPUESTA (14)	FECHA DEL OFICIO (14)	OFICIO DEL SOLICITUD (15)	FECHA DEL OFICIO (15)	OFICIO DE RESPUESTA (16)	FECHA DEL OFICIO (16)	OFICIO DEL SOLICITUD (17)	FECHA DEL OFICIO (17)	OFICIO DE RESPUESTA (18)	FECHA DEL OFICIO (18)	OFICIO DEL SOLICITUD (19)	FECHA DEL OFICIO (19)	OFICIO DE RESPUESTA (20)	FECHA DEL OFICIO (20)	OFICIO DEL SOLICITUD (21)	FECHA DEL OFICIO (21)	OFICIO DE RESPUESTA (22)	FECHA DEL OFICIO (22)
480	Luis Manuel Martínez Mesa	MEXCEL58072027 4800	3315	#####	4	Tlaxaco	Ave. Prof. Rom. Esf. 205-C, Col. Informal CD. Industrial, C.P. 86010, Centro, Tlaxaco.																												
481	Elena Hernández Hernández	MEXCEL700622704 4810	3316	#####	4	Tlaxaco	Calletera Principal km. 116, La Caba C.P. 86250, Centro, Tlaxaco.																												
482	Rosael Hernández Hernández	MEXCEL0410102714 4820	3318	#####	4	Tlaxaco	Circulo La Caba km. 116, Col. Río La Caba, C.P. 86250, Centro, Tlaxaco.																												

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No.	C.I.	C.I.E	FOLIO	IMPORTE	ESTADO	DOMICILIO	DIRECCION JURIDICA			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES			INSTITUTO MEXICANO DEL REGISTRO SOCIAL			DIRECCION EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES			DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACION E INVESTIGACION PERSONAL			COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD		
							OFICIO	FECHA	OFICIO	FECHA	OFICIO	FECHA	OFICIO	FECHA	OFICIO	OFICIO	FECHA	OFICIO	FECHA	OFICIO	FECHA	OFICIO	FECHA	OFICIO	FECHA	OFICIO	FECHA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
536	Janele Gonzalez Torres	00175AN7502027M	3306	###	3	Tlaxcala	C. Concejales a.m.																				
		400					306 Col. Monte Esmeralda, C.P. 86350, Comalcalco, Tlaxcala.																				
536	Janele Arango Ayala	00148567010127M	3308	###	3	Tlaxcala	C. Domicilio																				
		000					Concedido sin Rta. Santiago Lopez tra. Seccion, C.P. 86600, Comalcalco, Tlaxcala.																				
536	Radha Grimalda Sosa	00185596411230M	3373	###	3	Tlaxcala	Eda. Simondora sh.																				
		000					Col. Finca. Acachilco, C.P. 86305, Comalcalco, Tlaxcala.																				

No.	C.I.	C.I.E	FOLIO	IMPORTE	DÍA	ESTADO	DOMICILIO	DIRECCIÓN JURÍDICA			SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES			INSTITUTO REGISTRARIO DEL REGISTRO SOCIAL			DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES			DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E INVESTIGACIÓN PERSONAL			COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD		
								OFICIO	FECHA	OFICIO	FECHA	OFICIO	FECHA	OFICIO	FECHA	OFICIO	FECHA	OFICIO	FECHA	OFICIO	FECHA	OFICIO	FECHA	OFICIO	FECHA	OFICIO	FECHA	OFICIO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
540	Reynardo González González	001	3378	00000000	3	Tlaxcala	Calle 1ra A Guaymas s/n. Bta. El Guaymas Hermosillo Sinaloa, C.P. 85300. Comisariado, Tlaxcala.																					
541	Johnny Chable García	001	3379	00000000	3	Tlaxcala	Calle 1ra A Lázaro s/n. Bta. El Guaymas Córdoba s/n. Bta. Guaymas s/n. Sección, C.P. 85530. Comisariado, Tlaxcala.																					
542	Camelina De La Rosa Aranda	001	3380	00000000	3	Tlaxcala	Calle 1ra A El Guaymas s/n. Bta. El Guaymas 2da. Sección, C.P. 85500, Comisariado, Tlaxcala.																					

[illegible]

No.	CIUDADANO	C.V.E. ELECTOR	FOLIO	IMPORTE	ESTADO	DOMICILIO	DIRECCION JURIDICA				SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES				INSTITUTO REGISTRARIO DEL REGISTRO SOCIAL				DIRECCION EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES				DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACION E IDENTIFICACION PERSONAL				COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD			
							ORGO SOLICITUD (9)	FECHA DEL OFICIO (9)	OFICIO DEL RESPUESTA (10)	FECHA DEL OFICIO (10)	OFICIO SOLICITUD (11)	FECHA DEL OFICIO (11)	OFICIO RESPUESTA A (12)	FECHA DEL OFICIO (12)	OFICIO SOLICITUD (13)	FECHA DEL OFICIO (13)	OFICIO RESPUESTA (14)	FECHA DEL OFICIO (14)	OFICIO SOLICITUD (15)	FECHA DEL OFICIO (15)	OFICIO RESPUESTA (16)	FECHA DEL OFICIO (16)	OFICIO SOLICITUD (17)	FECHA DEL OFICIO (17)	OFICIO RESPUESTA (18)	FECHA DEL OFICIO (18)	OFICIO SOLICITUD (19)	FECHA DEL OFICIO (19)	OFICIO RESPUESTA (20)	FECHA DEL OFICIO (20)	OFICIO SOLICITUD (21)	FECHA DEL OFICIO (21)	OFICIO RESPUESTA (22)	FECHA DEL OFICIO (22)
578	Luis Alfonso Sanchez Lescano	SNALZ/5650109274/000	3418	#####	5	Tabasco o Tabasco	Camatera Frontera A Villahermosa s/n. Ej. Cuervo Puerto, C.P. 86751, Centla, Tabasco.																											
596	Maria del Carmen Ovando Gomez	SN/04CEN/011127/0000	3435	#####	5	Tabasco o Tabasco	C. El Pinar s/n. Rta. Tierra Adentro Tra Secc. C.P. 86200. Jalpa de Méndez, Tabasco.																											
598	Maria Cristina Trono Magaña	TRONAC/2941032727/0000	3438	#####	5	Tabasco o Tabasco	C. Reforma s/n. Ej. El Carmen, C.P. 86200, Jalpa de Méndez, Tabasco.																											

No.	CIUDADANO (2)	C.V.E.E.L.E.C.T.O.R. (3)	FOLIO (4)	IMPORTE (5)	DÍAS (6)	ESTAD. (7)	DOMICILIO (8)	DIRECCIÓN JURÍDICA				SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES				INSTITUTO REGISTRARIO DEL REGISTRO SOCIAL				DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES				DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL				COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
								OFICIO DEL SOLICITUD (9)	FECHA DEL OFICIO (9)	OFICIO DE RESPUESTA (10)	FECHA DEL OFICIO (10)	OFICIO DEL SOLICITUD (11)	FECHA DEL OFICIO (11)	OFICIO A RESPUESTA (12)	FECHA DEL OFICIO (12)	OFICIO DEL SOLICITUD (13)	FECHA DEL OFICIO (13)	OFICIO DE RESPUESTA (14)	FECHA DEL OFICIO (14)	OFICIO DEL SOLICITUD (15)	FECHA DEL OFICIO (15)	OFICIO DE RESPUESTA (16)	FECHA DEL OFICIO (16)	OFICIO DEL SOLICITUD (17)	FECHA DEL OFICIO (17)	OFICIO DE RESPUESTA (18)	FECHA DEL OFICIO (18)	OFICIO DEL SOLICITUD (19)	FECHA DEL OFICIO (19)	OFICIO DE RESPUESTA (20)	FECHA DEL OFICIO (20)	OFICIO DEL SOLICITUD (21)	FECHA DEL OFICIO (21)	OFICIO DE RESPUESTA (22)	FECHA DEL OFICIO (22)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
620	Osvaldo Reyes Reyes	NYRVCLE472027H 200	3460	#####	6	Tribunales o	Camatera Principal sin. Rta San Miguel Adentro 2da. Sec., C.P. 8850, Jalapa, Tabasco.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

[illegible]

[illegible]

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS											
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN OMARRO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN OMARRO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DESCONOCER FIRMA DE RECIBO (37)	DESCONOCER CONTENIDO DE RECIBO (38)	DESCONOCER LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCER RECIBO (40)	RECONOCER CONTENIDO DE RECIBO (41)	RECONOCER LABORES CON PARTIDO (42)	RESPUESTA (43)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)		
UFORN49272013 UFORN41982014	20/11/2013 10/02/2014	UFORN49272013 30/02/2013	11/12/2013	Personal	UFORN49272014	03/03/2014	Personal					00/03/2014			SI	SI	SI		\$500.00		SI	No recibí	Se recibió la respuesta de la ciudad, y la firma que aparece en el recibo me la hicieron, no es la mía. Mi esposo Mario Alberto Ramírez Tigo y yo, estuvimos en la cacha como representantes del PRD.	Se recibió la respuesta de la ciudad, y la firma que aparece en el recibo me la hicieron, no es la mía. Mi esposo Mario Alberto Ramírez Tigo y yo, estuvimos en la cacha como representantes del PRD.	
UFORN49272013	20/11/2013	UFORN49272013 30/02/2013	10/11/2013	Personal								11/12/2013			SI	SI	-	-	-	-	-	No recibí	-	Se recibió la respuesta de la ciudad, y la firma que aparece en el recibo me la hicieron, no es la mía. Mi esposo Mario Alberto Ramírez Tigo y yo, estuvimos en la cacha como representantes del PRD.	
UFORN49272013	20/11/2013	UFORN49272013 30/02/2013	16/12/2013	Personal								17/12/2013			SI	SI	-	-	-	-	SI	No recibí	Fue Representante General de Movimiento Progresista	Fue Representante General de Movimiento Progresista	Se recibió la respuesta de la ciudad, y la firma que aparece en el recibo me la hicieron, no es la mía. Mi esposo Mario Alberto Ramírez Tigo y yo, estuvimos en la cacha como representantes del PRD.
UFORN49272013	20/11/2013	UFORN49272013 30/02/2013	16/12/2013	Personal								17/12/2013			SI	SI	-	-	-	-	SI	No recibí	Fue Representante General de Movimiento Progresista	Fue Representante General de Movimiento Progresista	Se recibió la respuesta de la ciudad, y la firma que aparece en el recibo me la hicieron, no es la mía. Mi esposo Mario Alberto Ramírez Tigo y yo, estuvimos en la cacha como representantes del PRD.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS															RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	266 OFICINAS DE OMERO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICINAS DE OMERO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DESCONOCER FIRMA DE RECIBO (37)	DESCONOCER CONTENIDO DE RECIBO (38)	DESCONOCER LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCER FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCER CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCER LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)		
UFORM11892013	2011/12/13	UFORM11892013	10/12/2013	Por un tercero									17/12/2013	S	S	-	-	-	S	No recibí	Fue Representante General de Movimiento Progresista			
UFORM95272013	2011/12/13	UFORM95272013	10/12/2013	Personal									13/12/2013	S	S	-	-	-	S	No recibí	Hizo P.G. para Movimiento Progresista			
UFORM95272013	2011/12/13	UFORM11892014	10/12/2013	Por un tercero	UFORM1208/2014	03/03/2014	Por un tercero						02/02/2014	S	S	S	-	-	-	No recibí	-			
UFORM95272013	2011/12/13	UFORM11892014	10/12/2013	Por un tercero	UFORM1208/2014	03/03/2014	Por un tercero						02/02/2014	S	S	S	-	-	-	No recibí	-			

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS											
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN OMARDO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN OMARDO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE MONTO RECIBO (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORN465272013	20/11/2013	UFORN465272013	12/12/2013	Personal										08/01/2014	SI	SI	-	-	SI	-	-	No recibí	-	Si trabajé en las selecciones de 2012 representando al PRQ, yo fui representante general y recibí un pago de \$1,000.00 por mi trabajo y \$200.00 para crédito del celular y \$400.00 para gasolina y no firmé por ese dinero nada más, ni por ninguna otra cantidad.	
UFORN465272013	20/11/2013	UFORN465272013	12/12/2013	Personal										19/12/2013	SI	SI	-	-	SI	-	-	No recibí	Recibí \$200.00 el día de la jornada electoral y \$500.00 una semana después.	Declaro haber recibido la cantidad de \$700.00 de la Coalición Movimiento Progresista en dos partes, el día de las elecciones \$200.00 y a la siguiente semana \$500.00 que da un total de \$700.00, por tal motivo es evidente que yo recibí \$600.00, dicha cantidad la desconozco	
UFORN465272013	20/11/2013	UFORN465272013	11/12/2013	Personal										19/12/2013	SI	SI	-	-	SI	-	-	No recibí	Fue Representante General del PRQ, quiero manifestar que únicamente recibí la cantidad de \$1,000.00 por sus funciones, la cantidad de \$5,000.00 que consta el recibo presentado por la Coalición Movimiento Progresista. Que no reconozco como mía la firma firmada en el recibo que presenta la Coalición, tal y como consta en el recibo.		

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS															RESPUESTA DE CIUDADANOS							
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO ONARIO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO ONARIO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (36)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UJFORN522013 NEUFORN18402 P14. Questionario	20/11/2013 15/05/2014	UJFORN 25/02/2013	09/12/2013	Personal	NEUFORN18402 Oficio Vocal	23/09/2014	Personal					13/10/2014		SI	SI	SI	-	-	No recibí		-	haber recibido ningún recurso económico por concepto de campaña política a nivel Federal Diputados y Senadores. 4) Negó rotundamente el contenido y firma de recibido alguno; no ha ejecutado acción penal, pues no otra en poder del resto del que se dio firme; 5) Recusado no haber firmado recibido y...
UJFORN522013 NEUFORN18402 P14. Questionario	20/11/2013 15/05/2014	UJFORN 26/02/2013	12/12/2013	Personal	NEUFORN18402 Oficio Vocal	04/09/2014	Personal					13/10/2014		SI	SI	SI	-	-	No recibí		-	1) Desconozco el documento "Recurso de Reconocimiento por Actividades Políticas en Campaña Federal" a mi nombre. 3) No recibí dinero alguno. 4) Si ejecuto acción penal ante la PGJ del Estado. 5) Que se investigue y se señalen las acciones que corresponden para que se castigue al responsable de otorgar el dinero.
UJFORN522013 NEUFORN18402 P14. Questionario	20/11/2013 15/05/2014	UJFORN 27/12/2013	16/12/2013	Personal	NEUFORN18402 Oficio Vocal	04/09/2014	Personal					13/10/2014		-	ESPECIE (calam. firmado para vehículo, gorras y playeras)	SI	SI	SI	No recibí		-	1) "Colaboro" que "toco" y "tomo" documento por actividades políticas. 2) Se apoyó al Primer Distrito Federal para el cargo de Diputado Federal, así como también para candidato a Senador por el Estado de Campeche, la actividad fue recepción de propaganda electoral, consistiere en foros y actividades. 3) La forma de pago fue en especie consistente en camion, para propaganda electoral. 5) Me sentí sorprendido por...

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGEN SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORN05202013 INEUFORN18402 P14. Cuestionario	20/11/2013 15/02/2014	UFORN05202013 27/02/2013	17/12/2013	Personal	INEUFORN18402 46/2014 Oficio Vocal	20/02/2014	Personal					13/10/2014		SI	SI	SI	-	-	-	No recibido	-		1) Conoci el documento hasta que el personal del IFE me lo entregó por correo, no lo conocía con anterioridad. 4) No he recibido ningún tipo de acción penal. 5) Desconozco el documento, nunca he recibido la cantidad que en el documento dice.
UFORN05202013 INEUFORN18402 P14. Cuestionario	20/11/2013 15/02/2014	UFORN05202013 27/02/2013	17/12/2013	Personal										SI	SI	-	-	-	-	SI	No recibido	Representante Distrital	Convenimiento del reconocimiento y por consiguiente no tuve a la vista el dato recibo y no he recibido dinero alguno por la cantidad de \$6,000.00 y apreciando que en el dato recibo obtuve una firma o rubrica la cual no es del suceso. En ningún momento me fue entregado por pago en efectivo, en cheque, en transferencia bancaria o mediante tarjeta bancaria ya sea por parte del IFE o de la Comisión Movimiento.
INEUFORN05202013 INEUFORN18402 P14. Cuestionario	20/11/2013 15/02/2014	UFORN05202013 27/02/2013	17/12/2013	Personal	INEUFORN18402 54/2014 Oficio al vocal	27/02/2014	No diligenciado					EN LA NOT		SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibido	-	

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICIST ONARIO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICIST ONARIO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DESCONOCER FIRMA DE RECIBO (37)	DESCONOCER CONTENIDO DE RECIBO (38)	DESCONOCER LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCER QUE RECIBO (40)	RECONOCER FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCER CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCER LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)
INEURV929/2013 29/11/2013 15/05/2014 314 Cuernavaca	UFDNRV 30/02/2013	11/12/2013	Personal	NEUFDRN1542 54/2014 Oficio al vocal	27/05/2014	Personal							13/09/2014	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibio	-	1) Que no reconoce haber recibido \$6000.00 y que la firma que aparece en el recibo 6228, de fecha 30 de mayo de 2012 no es la suya. 4) Que no ha ejercido dichas acciones porque no le gusta referirse en primera persona. 5) Que no desea hacer impugnación.
INEURV929/2013 29/11/2013 15/05/2014 314 Cuernavaca	UFDNRV 30/02/2013	17/12/2013	Personal	NEUFDRN1542 54/2014 Oficio al vocal	30/05/2014	Personal							13/09/2014	-	SI	SI	-	-	-	-	No recibio		1) Que el recibo es el recibo 6234 de fecha 30 de mayo de 2012 y también haber recibido la cantidad de \$6,000.00. 2) Que su actividad consistió en trasladar ciudadanos en las 3 secciones ordinarias de 2012 en los distos electorales 08 y 09 en cabecera en la ciudad de Oahuatl. 3) Que se le entregó en efectivo las \$6,000.00 y se los entregó la C. Mónica Rivers Guzmán, con domicilio en la C Kennedy 5007, Colonia Gregorio Cortés, C.P. 31089 y le fue entregada la suma de \$10 de mayo de 2012, en

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS											
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE QUE RECIBO (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
NEJURN9329/2013 D NEJUFORN154/2014 D14 Cuestionario	20/11/2013 15/05/2014	UFORN 26/12/2013	1/11/2013	Personal	NEJUFORN154/2014 5/4/2014 Oficial vocal	27-05-14	Personal							13/05/2014	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibido	-		1) No está de acuerdo en que recibió ese dinero y que no reconoce la firma del rubro 6237 de fecha 30 de mayo de 2012. 4) Que no ha ejercido penas, sanciones, ni acciones penales, sino al contrario. 5) Que no tiene nada que responder al respecto.
NEJURN9329/2013 D	20/11/2013	UFORN 26/02/2013	1/21/2013	Personal	NEJUFORN154/2014 5/4/2014 Oficial vocal	27-05-14	Personal							13/05/2014	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibido	-		1) Que no reconoce haber recibido la cantidad de \$6000.00, así como tampoco reconoce la firma que aparece en el rubro con folio 6238 de fecha 30 de mayo de 2012. 4) Que no ha ejercido ninguna acción penal. 5) Que no desea aclarar nada al respecto.
NEJURN9329/2013 D NEJUFORN154/2014 D14 Cuestionario	20/11/2013 15/05/2014	UFORN 26/12/2013	1/21/2013	Personal	NEJUFORN154/2014 5/4/2014 Oficial vocal	27-05-14	Personal							13/05/2014	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibido	-		1) Que no reconoce haber recibido la cantidad de \$6000.00 que aparece en el rubro con folio 6240, de fecha 30 de mayo de 2012. 4) Que no ha ejercido ninguna acción penal. 5) Que no desea aclarar nada al respecto.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DESCONOCER FIRMA DE RECIBO (37)	DESCONOCER CONTENIDO DE RECIBO (38)	DESCONOCER LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCER FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCER CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCER LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)
INEURV520/2013 3 INEURV184/2014 214 Cuadrante	20/11/2013 15/03/2014	UFDINA 20/12/2013	17/12/2013	Por un tercero	INEURV184/2014 Oficio al vocal	02/05/2014	Personal							13/02/2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí		Se dio, pero que la firma si se parece a la que utiliza, pero en la fecha 15 de junio de 2012 tenía licencia por enfermedad de su mamá y esa es parte de una Registra; 2) Que desconoce porque como ya se señaló ella estaba de licencia y no se encontraba en la ciudad de Chihuahua; 3) Que desconoce la forma de pago o quien lo realizó o la fecha y lugar y fecha en que se recibió y lugar y fecha en que se ocurrió cuando y donde ocurrió, la ignora; 4) No llega al contenido, ni desconoce la firma, solo manifiesta que ella no recibió el dinero que dice
INEURV520/2013 3 INEURV184/2014 214 Cuadrante	20/11/2013 15/03/2014	UFDINA 20/12/2013	17/12/2013	Personal	INEURV184/2014 Oficio al vocal	27/05/2014	Personal							13/02/2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí		1) No reconoce que recibí el dinero depositado en el REPAP-CDIA ni dinero alguno; 4) La firma que aparece es muy semejante a la de ella, mas sin embargo no reconoce ni recuerda recibir el dinero de dicho recibo, no ha pasado acciones penales por no haber de tal caso; No desea agregar nada mas y desconoce de que se trata.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGEN SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORN/18/72014	30/03/2014	UFORN/18/72014	13/03/2014	No asignado								14/02/2014		-	-	-	SI	SI	SI	No recibí		El recurso fue recibido por parte del PIRQ Comité Ejecutivo Estatal Jalisco, la cantidad de \$3,000.00 en efectivo, y si firmé el recibo que se anexa a la notificación que recibí. Asimismo pago de su conocimiento, bajo protesta de decir verdad, la entrega de los recursos a la organización por mi en efectivo. Que la actividad fue esporádica, no teniendo relación contractual alguna con el PIRQ Comité Jalisco. La fecha que recibí el recurso fue el día 27 de junio de 2012, mi relación con el PIRQ es simpatizante. Así mismo,	
UFORN/18/72014 UFORN/14/6202014	30/03/2014 21/09/2014	UFORN/18/72014 30/10/2014	13/03/2014	No asignado			Personal					15/03/2014		SI	SI	SI	-	-	-	No recibí		No es verdad que me entregaron \$6,000.00, no se quien usó los datos y hasta realizaron mi firma para realizar trámites de pago, ya que ese es un delito, solo lo pido que quede claro que yo no recibí nada.	

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS												
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO SOLICITUD (24)	FECHA NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD ONARIO (27)	FECHA NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD ONARIO (30)	FECHA NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD (33)	FECHA NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE QUI RECIBO (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)		
UFORN18/72014	30/03/2014	UFORN18/72014	1/30/2/2014	Por un tercero										2-4/3/2/2014	SI	SI	-	-	-	SI	-	-	No recibido	Se entregó el dinero en el recibo, se reconoció solamente la existencia del mencionado recibo, a mi parecer los que andaban en ese partido a cuidar la casilla que se usaba en mi población San Isidro. Pero Verde, yo les ayude voluntariamente, ja más de dinero, ni tampoco me ofrecieron nada, un día antes de las elecciones fueron a mi domicilio el supra indicando los encargados del partido, me dieron a firmar muchos papeles para entregarme el material para la casilla, que fue un padron de votantes, unas hojas blancas, un sobre, un borrador, jante sabe yo de la cantidad de dinero que don me entregaron, lo recibí y lo recibí.		
UFORN18/72014	30/03/2014	UFORN18/72014	1/30/2/2014	Personal	INEUTICRM02/2014 Cuadernito aplicado	23/05/2014	Personal							1/30/2/2014	SI	SI	-	\$200.00	-	-	-	-	No recibido			1) Desconoce el origen del recibo y el monto \$200.00 en un sobre; 2) No recuerdo haber firmado y yo a mi familia, no lo he presentado; 3) He una copia de respuesta y se la he enviado por correo electrónico, en la que afirmé que era mentira haber recibido el dinero que se menciona.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS				
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGEN SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN OMARCO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN OMARCO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	RECONOCE RECIPO CON PARTIDO (41)	RECONOCE RECIPO CON PARTIDO (42)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)
UFERN1872014 NEUTERN0230 2014 Cuatrimano	06/03/2014 06/06/2014	UFERN 01/03/2014	NO TENIA FECHA	Personal	NEUTERN 23/03/2014 Cuatrimano aplicado	24/06/2014	Personal					17/07/2014		-	-	Ne recibio	-	1) No lo firme ni recibí ningún dinero; 2) No recibí ningún dinero ni ninguna prestación; 4) y 5) NO
UFERN1872014 NEUTERN0230 2014 Cuatrimano	06/03/2014 06/06/2014	UFERN 01/03/2014	1/03/2014	Por un tercero	NEUTERN 23/03/2014 Cuatrimano aplicado	20/06/2014	Personal					17/07/2014		-	-	Ne recibio	Solo recibí la cantidad de \$150.00 y el bonche que le diaron el día de la caída el día de la votación	1) No conozco el origen del documento; 4) La firma no es de ella; no ha denunciado dado que quiero \$150.00 y el bonche que le diaron el día de la caída el día de la votación
UFERN1872014 06/03/2014	UFERN 01/03/2014	11/03/2014	Personal									20/03/2014		-	-	Ne recibio	Fui representante suplente de la caída y solo la diaron comata y le pagaron \$100.00.	Denunciado el origen del recibo, así mismo la firma que se encuentra en el mismo no es la mía, ya que como representante no sabía que estaba ese recibo. Fui representante de caída y solo la diaron comata y le pagaron \$100.00.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO/OCUEST ONARIO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO/OCUEST ONARIO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE QUE RECIBO (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UJFORN18072014	05/03/2014	UJFORN18172014	12/03/2014	Por un tercero								20/03/2014		SI	SI	-	\$100.00	-			SI	No recibí	Fue representante de casta y le pagaron \$100.00, de manera personal por Heñor Guerrero Palermio.	En las elecciones del año 2012 fui invitado por simpatizantes del PRE como observador durante la primera sesión de las votaciones en la ventanilla instalada en la Escuela Primaria de esta comunidad, con un sueldo de las 8.00 a las 21.00 hrs de la 2 de julio del año indicado, sin haber recibido ningún pago, solamente como reconocimiento de mi participación, me fue entregada el día siguiente la cantidad de \$100.00 de manos de Heñor Guerrero Palermio de parte del partido, sin
UJFORN18072014	05/03/2014	UJFORN18182014	11/03/2014	Personal								20/03/2014		SI	SI	-	\$100.00	-			SI	No recibí	Fue representante de casta y le pagaron \$100.00, de manera personal por Heñor Guerrero Palermio.	En las elecciones del año 2012 fui invitado por simpatizantes del PRE como observador durante la primera sesión de las votaciones en la ventanilla instalada en la Escuela Primaria de esta comunidad, con un sueldo de las 8.00 a las 21.00 hrs de la 2 de julio del año indicado, sin haber recibido ningún pago, solamente como reconocimiento de mi participación, me fue entregada el día siguiente la cantidad de \$100.00 de manos de Heñor Guerrero Palermio de parte del partido, sin

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS											
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN ONARIO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN ONARIO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE QUI RECIBO (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
U/FORN/18/72014	05/03/2014	U/FORN/18/72014	13/03/2014	Personal										14/04/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	-	En lo que refiere al punto uno mego estandarmente haber recibido dinero alguno por las actividades reconocidas. Quiero señalar que la afirmación que menciona el Partido Político es totalmente falsa y la firma que se presenta en el recibo es también completamente falsa.
U/FORN/18/72014	05/03/2014	U/FORN/18/72014	13/03/2014	Por un tercero										14/04/2014	-	-	-	SI	SI	SI	SI	SI	No recibí	El recurso fue recibido por una advenza los gastos propios de la organización previa y durante la jornada electoral el día 1 de junio de 2012. m relación con el PRD es simplazante. Así mismo, manifiesto que el recurso fue para	

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGEN SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (40)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (41)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (42)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORN18772014	05/03/2014	UFORN18772014	25/03/2014	Personal								14/04/2014			SI	SI	-	-	-	-	SI	No recibí	Fue representante de casilla	Fue invitado por un amigo a este partido, lo acepté como simpatizante, pero en ningún momento de andar en campaña y le informo que si estubo en una casilla como representante de dicho partido. Quiero informarle que no recibí ninguna cantidad de dinero en cheque, transferencia bancaria, ni en tarjeta de crédito y que de hecho no firmé ningún documento, la firma que aparece en el documento es de mi hermano.
UFORN18772014	05/03/2014	UFORN18772014	20/03/2014	Personal								14/04/2014			SI	SI	-	-	-	-	SI	No recibí	Fue representante de casilla	Fue invitado por un familiar a este partido, lo acepté como simpatizante, pero sin ningún compromiso de andar en campaña y le informo que si estubo en una casilla como representante de dicho partido. Quiero informarle que no recibí ninguna cantidad de dinero en cheque, transferencia bancaria, ni en tarjeta de crédito y que de hecho no firmé ningún documento, la firma que aparece en el documento es de mi hermano.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS												
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGEN SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DESCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DESCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DESCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE RECIBO (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)		
UFORN/18/72014 (NEUTFOR0229) 2014 Cuestionario	16/03/2014	UFORN/18/72014 (NEUTFOR0229) 2014 Cuestionario	27/03/2014	Personal										14/04/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-		Viene queriendo explicar, que es invitado por un familiar de este partido, lo aceptó como representante, pero sin ningún compromiso de andar en campaña, luego de su comentario que no recibí dicha erogación, ni en efectivo, cheque o transferencia bancaria, de parte de la Coalición Movimiento Progresista, ni alguna otra persona, desconozco la existencia de	1) No conozco el origen de ese medio, pero veo que la firma es legítima; 2) No recibí el ciudadano ningún recurso económico; 3) No ha ejercido acciones jurídicas al respecto.
UFORN/18/72014 (NEUTFOR0229) 2014 Cuestionario	16/03/2014	UFORN/18/72014 (NEUTFOR0229) 2014 Cuestionario	26/03/2014	Personal	NEUTFOR0229 239/2014 Cuestionario aplicado	18/05/2014	Personal	Personal						17/07/2014	SI	SI	-	SI	\$200.00	-	-	SI	No recibí	Solo recibí la cantidad de \$200.00 por el código a calle, chequeado por el presidente municipal para el PDC para presidente municipal	1) No conozco el origen de ese medio, pero veo que la firma es legítima; 2) No recibí el ciudadano ningún recurso económico; 3) No ha ejercido acciones jurídicas al respecto.	
UFORN/18/72014 (NEUTFOR0229) 2014 Cuestionario	16/03/2014	UFORN/18/72014 (NEUTFOR0229) 2014 Cuestionario	21/03/2014	Personal	NEUTFOR0229 239/2014 Cuestionario aplicado	23/05/2014	Personal	Personal						17/07/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-		1) No conozco el origen de ese medio, pero veo que la firma es legítima; 2) No recibí el ciudadano ningún recurso económico; 3) No ha ejercido acciones jurídicas al respecto.	

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (40)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORN18072014 VOCAL (NEUFORN022014) 2014 Cuasileonero	05/03/2014 05/03/2014	UFORN18072014 05/03/2014	18/03/2014	Personal	NEUFORN022014 23/03/2014 Cuasileonero aplicado	20/09/2014	Personal					17/07/2014			SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	Solo recibí comida	1) No es su firma y nada de dinero. 3) No recibí dinero, solo comida; 4) ninguna	
UFORN18072014		UFORN18072014 05/03/2014	25/03/2014	Personal								14/03/2014			SI	SI	SI	-	-	-	SI	No recibí	Fue representante de casilla	He recibido por un amigo a este partido, pero si acepté como representante, pero en ningún momento de andar en campaña y le informo que si estubo en una casilla como representante de dicho partido. Otro informo que no recibí ninguna cantidad de dinero en cheque, transferencia bancaria, ni en tarjeta de crédito y que de hecho no firmé ningún documento, la firma que aparece es
UFORN18072014		UFORN18072014 05/03/2014	18/03/2014	Por un tercero								14/03/2014			SI	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	Hecho de su conocimiento que no recibí dicha erogación de parte de la comisión Movimiento Progresista, ni alguna otra, desconozco la asignación de dicho recurso.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS											
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGEN SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN ONARIO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN ONARIO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)		
UFORN18072014	30/03/2014	UFORN18072014	20/03/2014	Por un tercero										14/03/2014	S	S	-	-	S	-	S	No recibí	Por representante de casilla	Se le informó por correo electrónico de la solicitud, pero no se le dio respuesta, lo que se le solicitó, pero sin ningún compromiso de andar en campaña y el informe que se está en una casilla como representante de dicho partido. Como informante que no recibí ninguna cantidad de dinero en especie, transacción bancaria, ni en especie de crédito y que de hecho no tiene ningún documento, la firma que el dinero y la firma no es la mía; 2. Como ya lo expresó con anterioridad no recibí ninguna cantidad de dinero y desconoce el origen del mismo; 3. Como ya lo expresó al no recibir dinero y no reconocer la firma que así aparece figura la fecha y la cantidad que se entregó y la cantidad que se refiere al rubro; 4. No ha ejercido acción penal alguna no obstante no reconocer el rubro se referencia, porque quien quien haya solicitado su firma y se reserva el derecho para hacerlo; 5.	
UFORN18072014 NEUUFORN022014 2014 Cuadrante	30/03/2014 30/03/2014	UFORN18072014 30/03/2014	18/03/2014	Por un tercero	NEUUFORN022014 23/03/2014 Cuadrante aplicado	03/07/2014	Personal							17/07/2014	S	S	S	-	-	-	No recibí	-	Como ya lo expresó con anterioridad no recibí ninguna cantidad de dinero y desconoce el origen del mismo; 3. Como ya lo expresó al no recibir dinero y no reconocer la firma que así aparece figura la fecha y la cantidad que se entregó y la cantidad que se refiere al rubro; 4. No ha ejercido acción penal alguna no obstante no reconocer el rubro se referencia, porque quien quien haya solicitado su firma y se reserva el derecho para hacerlo; 5.		

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS															RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN ONARIO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN ONARIO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE QUI RECIBO (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORN18072014	30/03/2014	UFORN18072014	18/03/2014	Por un tercero										14/04/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	-	Ninguna información que el sujeto haya participado con el partido político ya que el sujeto nunca ha participado con ningún partido, pero que el sujeto tampoco me ha designado como trabajador en el H. Ayuntamiento municipal, como miembro de seguridad pública, razón por la cual me impedía participar con los partidos políticos, desconociendo el motivo o circunstancia por el que se me ha reconocido como miembro del partido político que grafican con el reconocimiento que se envía, además desconociendo el porque presentan mis datos personales en este partido si el sujeto nunca ha firmado o dado alguna parte pertenecer a algún partido. Solicito se realice la investigación correspondiente para que se informe.
UFORN18072014	30/03/2014	UFORN18072014	17/03/2014	Personal										14/04/2014	SI	SI	-	-	-	-	SI	SI	No recibí	Para representante de casilla	Como representante de casilla, como representante de dicho partido. Como informante que recibí ninguna cantidad de dinero en cheque transacción bancaria, ni en tarjeta de crédito y que de hecho no firmo ningún documento, lo firmare en el dicho sujeto a su

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN ONARIO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN ONARIO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORN18072014 INEUTERU0242014	05/03/2014 23/10/2014	UFORN18072014 88392014	17/03/2014	Personal	NEUTERU0242014 429-2014	28/10/2014	Personal							09/11/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	En mi caso mego haber recibido cualquier cantidad de dinero bajo ningún concepto, ya que no asistí a la actividad pública y la firma que aparece en ese documento no es mía ni coincide con la firma que aparece en mi conformidad de elector.
UFORN18072014																								En mi caso mego haber recibido cualquier cantidad de dinero bajo ningún concepto, ya que no asistí a la actividad pública y la firma que aparece en ese documento no es mía ni coincide con la firma que aparece en mi conformidad de elector.
UFORN18072014		UFORN18072014 88392014	17/03/2014	Personal										14/03/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	En mi caso mego haber recibido cualquier cantidad de dinero bajo ningún concepto, ya que no asistí a la actividad pública y la firma que aparece en ese documento no es mía ni coincide con la firma que aparece en mi conformidad de elector.
UFORN18072014		UFORN18072014 88392014	20/03/2014	Personal										14/03/2014	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	-	En mi caso mego haber recibido cualquier cantidad de dinero bajo ningún concepto, ya que no asistí a la actividad pública y la firma que aparece en ese documento no es mía ni coincide con la firma que aparece en mi conformidad de elector.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS															RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGEN SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN OMARDO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN OMARDO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (40)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (41)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFFORN18072014 VOCAL (INEUTERNA2014 Cuestionario	30/03/2014	UFFORN18072014	17/03/2014	Personal	NEUTERNA2014 Cuestionario aplicado	23/06/2014	Personal							17/07/2014	SI	SI	-	SI	-	-	-	SI	No recibí	Solo recibí la cantidad de \$200.00 por aceptar la elección municipal	1) No recibí \$600.00 solo \$200.00 y no le dan recibo, desconoce el origen del recibo y apoyo la decisión municipal. 2) Le dan \$200.00 en efectivo y en firma. 4) No ha girado acciones penales. 5) Ninguna
UFFORN18062014	30/03/2014	UFFORN18062014	25/03/2014	Personal										14/04/2014	SI	SI	-	SI	-	-	-	SI	No recibí	Fue representante de cailla	Recibido por un amigo a este partido, se aceptó como representante, pero en ningún momento de estar en campaña y le informo que si estubo en una cailla como representante de dicho partido. Otro informe que no recibí ninguna cantidad de dinero en cheque, transferencia bancaria, ni en tarjeta de crédito y que de hecho no firmé ningún documento, la firma que aparece en el talón adjunto a su oficio por un representante del partido.
UFFORN18062014	30/03/2014	UFFORN18062014	19/03/2014	Personal										23/03/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	-	No he recibido ningún dinero de ningún partido político. La apuesta firma, no corresponde a la firma que uso incluso en mi credencial de elector, cabe mencionar que no he intervenido a ningún partido político nunca, mucho menos he recibido ningún incentivo económico ni de otra naturaleza por parte de algún partido político.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS															RESPUESTA DE CIUDADANOS								
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGEN SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN OMARCO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN OMARCO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	DISCONOCE FIRMAS DE RECIBO (36)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMAS DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFERN1862014	30/03/2014	UFERN 30/12/2014	19/03/2014	Personal								14/04/2014		SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	Fue de su conocimiento que no recibí dicha erogación, ni en efectivo, cheque o transferencia bancaria, de parte de la Comisión Municipal Progresista, ni alguna otra, desconozco la existencia de dicho recurso, así mismo, señalo que la firma presentada en el recibo no fue hecha por mí, las firmas son falsas y no me acuerdo.	
UFERN1862014 NEUTERN0230 2014 Cuadrante	30/03/2014	UFERN 30/03/2014	21/03/2014	Por un tercero	NEUTERN 23/03/2014 Cuadrante aplicado	23/03/2014	Personal					17/07/2014		SI	SI	-	-	-	-	-	No recibí	-	1) Si desconoce el origen de ese recibo. 3) No recibí dinero ni recibo el día de la jornada electoral; 4) No he ejercido acciones penales.
UFERN1862014	30/03/2014	UFERN 30/03/2014	19/03/2014	Personal								14/04/2014		SI	SI	-	-	-	SI	-	No recibí	Por representante de casilla	Un amigo a este partido, lo acepto como representante, pero sin ningún compromiso de andar en campaña y le informo que si estubo en una casilla como representante de dicho partido. Quiero informarle que no recibí ninguna cantidad de dinero en efectivo, transferencia bancaria, ni en leyenda de crédito y que de hecho no tiene ningún documento, la firma que aparece en el talón adjunto a su solicitud es por un supuesto

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGEN SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN ONARIO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN ONARIO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	DESCONOCE FIRMA DE RECIBO (36)	DESCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DESCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORN18602014	03/03/2014	UFORN18602014	19/03/2014	Por un tercero								14/04/2014		SI	SI	-	-	-	SI	No recibí	Se representante de casilla		Quiero explicar, que fui invitado por un amigo a este partido, lo acepté como simpatizante, pero sin ningún compromiso de estar en campaña y le informo que si estuve en una casilla como representante de dicho partido. Quiero informarle que no recibí ninguna cantidad de dinero en especie, transferencia bancaria, ni en especie de crédito y que de hecho no firmé ningún documento, la firma que aparece en el foto adjunta es la mía
UFORN18602014	03/03/2014	UFORN18602014	19/03/2014	Personal	NEUTIFORM2014	23/06/2014	Personal					17/07/2014		SI	SI	-	-	-	SI	No recibí	Ayuda a Paga Se acreditada a regidor		1) Han falsificado su firma y desconoce el origen del recibo que se muestra; 3) Nunca recibí dinero ni conozco al que firma el recibo. Paga Sees candidato a Regidor; 4) No ha ejercido acción penal en contra de nadie
UFORN18602014	03/03/2014	UFORN18602014	21/03/2014	Personal	NEUTIFORM2014	03/07/2014	Personal					17/07/2014		SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-		1) No es su firma, es pariente; 3) No recibí dinero; 4) No ha ejercido acciones penales.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN OMARRO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN OMARRO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UJFORN18602014	30/03/2014	UJFORN18602014	20/03/2014	Personal										14/04/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	Hago de su conocimiento que no recibí dicha exigencia, ni en efectivo, cheque o transferencia bancaria, de parte de la Coalición Movimiento Progresista, ni alguna otra, desconozco la existencia de dicho recibo, así mismo, señalo que la firma plasmada en el recibo no fue hecha por mí, los trazos son idénticos a mi rubrica.
UJFORN18602014	30/03/2014	UJFORN18602014	20/03/2014	Personal										14/04/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	Hago de su conocimiento que no recibí dicha exigencia, ni en efectivo, cheque o transferencia bancaria, de parte de la Coalición Movimiento Progresista, ni alguna otra, desconozco la existencia de dicho recibo, así mismo, señalo que la firma plasmada en el recibo no fue hecha por mí, los trazos son idénticos a mi rubrica.
UJFORN18602014	30/03/2014	UJFORN18602014	20/03/2014	Personal										14/04/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	Hago de su conocimiento que no recibí dicha exigencia, ni en efectivo, cheque o transferencia bancaria, de parte de la Coalición Movimiento Progresista, ni alguna otra, desconozco la existencia de dicho recibo, así mismo, señalo que la firma plasmada en el recibo no fue hecha por mí, los trazos son idénticos a mi rubrica.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGEN SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)
UFORN18602014	30/03/2014	UFORN18602014	19/03/2014	Por un tercero										14/04/2014	S	S	-	-	-	S	No recibí	Fue representante de cailla	Un amigo a este partido, lo acepté como simpatizante, pero sin ningún compromiso de andar en campaña y le informo que si estare en una cailla como representante de dicho partido. Quiero informarle que no recibí ninguna cantidad de dinero en especie, transacción bancaria, ni en especie de crédito y que de hecho no tiene ningún documento, la firma que aparece en el talón adjunto a su solicitud.
UFORN18602014	30/03/2014	UFORN18602014	19/03/2014	Personal										14/04/2014	S	S	-	-	-	S	No recibí	Fue representante de cailla	Un amigo a este partido, lo acepté como simpatizante, pero sin ningún compromiso de andar en campaña y le informo que si estare en una cailla como representante de dicho partido. Quiero informarle que no recibí ninguna cantidad de dinero en especie, transacción bancaria, ni en especie de crédito y que de hecho no tiene ningún documento, la firma que aparece en el talón adjunto a su solicitud.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORN21952014	22/05/2014	UFORN13032014	Por un tercero										14/04/2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	Se acompañó por actividades políticas en campaña federal con el PRO o Coalición Movimiento Progresista, así mismo, tiempo recibí el importe de \$50,00.00 como ayuda al recibo. No obstante que los datos señalados en el recibo como la dirección de mi domicilio no corresponden al mío. Admito en la	
UFORN18862014	06/03/2014	UFORN13032014	Por un tercero										27/03/2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	Se acompañó por actividades políticas en campaña federal con el PRO o Coalición Movimiento Progresista, así mismo, tiempo recibí el importe de \$50,00.00 como ayuda al recibo. No obstante que los datos señalados en el recibo como la dirección de mi domicilio no corresponden al mío. Admito en la	
UFORN18862014	21/03/2014	UFORN12032014	No diligenciado										03/03/2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	Se acompañó por actividades políticas en campaña federal con el PRO o Coalición Movimiento Progresista, así mismo, tiempo recibí el importe de \$50,00.00 como ayuda al recibo. No obstante que los datos señalados en el recibo como la dirección de mi domicilio no corresponden al mío. Admito en la	
RESUT-CH06242014	23/10/2014	UFORN18862014	No diligenciado										03/03/2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	Se acompañó por actividades políticas en campaña federal con el PRO o Coalición Movimiento Progresista, así mismo, tiempo recibí el importe de \$50,00.00 como ayuda al recibo. No obstante que los datos señalados en el recibo como la dirección de mi domicilio no corresponden al mío. Admito en la	

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN ONARIO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN ONARIO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORN18662014	06/03/2014	UFORN 01/12/2014	13/03/2014	Por un tercero										31/03/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	Me deslindo de cualquier responsabilidad que se me impute en mi nombre, asociado sea verifique en firma, para la que aparece en el recibo de reconocimiento por parte de la organización.
UFORN18662014	06/03/2014	UFORN 01/12/2014	13/03/2014	Por un tercero										14/03/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	Desconozco del año 2012, ni como funcionario de campaña, ni como representante de algún partido político, ni algo relacionado con los partidos políticos, por lo cual No recibí el 27 de junio de 2012 la cantidad de \$500.000 de algún pagaré, cheque, transferencia electrónica al fondo o cualquier otro tipo de pago.
UFORN21950014	22/05/2014	UFORN 01/05/2014	12/03/2014	Personal										14/03/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	Entregada en el Recibo número 0411 de Reconocimientos por Actividades Políticas en Campaña, emitido por la acta (sic) Coalición. Movimiento Progresista no corresponde a mi partido y esta ya que no la reconozco como mi partido, para a la fecha pedida en el mismo me encontraba

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS											
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN ONARIO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE QUI RECIBO (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORN18602014	06/03/2014	UFORN18602014	1/20/2014	Personal								14/07/2014			-	-	-	\$3,000.00	SI	SI	SI	SI	No recibí.	El recurso fue recibido por parte del elector igual al que se anexa al oficio de referencia; asimismo y bajo protesta de decir verdad declaro la veracidad de la información derivada de la organización política y durante la jornada electoral el día 1 de junio de 2012, me relacioné con el PRD en Campeche. Al mismo tiempo, manifiesto que el recurso fue para solventar los gastos por Reconocimiento de Actividades Políticas de Campaña, de lo cual se me dio la cantidad de \$100.00. Ayudé en una casilla electoralmente para observar que el periodo electoral transcurriera de manera tranquila, no recibí ninguna información si la actividad que me relacioné era de campaña electoral del Presidente, Senador o Diputado. El monto se me entregó en efectivo.	Comité Ejecutivo Estatal Jalisco, la cantidad de \$1000.00, inefectivo, y así finalé un medio, por la recepción del efectivo igual al que se anexa al oficio de referencia; asimismo y bajo protesta de decir verdad declaro la veracidad de la información derivada de la organización política y durante la jornada electoral el día 1 de junio de 2012, me relacioné con el PRD en Campeche. Al mismo tiempo, manifiesto que el recurso fue para solventar los gastos por Reconocimiento de Actividades Políticas de Campaña, de lo cual se me dio la cantidad de \$100.00. Ayudé en una casilla electoralmente para observar que el periodo electoral transcurriera de manera tranquila, no recibí ninguna información si la actividad que me relacioné era de campaña electoral del Presidente, Senador o Diputado. El monto se me entregó en efectivo.
UFORN18602014	10/03/2014	UFORN18602014	1/03/2014	Personal											2/10/2014	SI	SI	-	\$100.00	-	-	SI	No recibí.	Fue representante de casilla	

3590

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN OMARCO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN OMARCO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	DESCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DESCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DESCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE QUE RECIBO (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORN19302014 NEUTEDRAN230 2014 Cuasidario	10/03/2014 30/06/2014	UFORN 34/02/2014	19/03/2014	Personal	NEUTEDRAN 23/02/2014 Cuasidario aplicado	19/09/2014	Personal					17/07/2014		SI	SI	SI	-	-	-	-	-	No recibí	-	en ningún momento fue entregado ningún dinero; 2) Como he actuado no reconozco ni recibí dinero alguno; 3) Yo no he podido confirmar nada porque en ningún momento me entregaron dinero; 4) Desconozco la firma que aparece en el recibo no he puesto ninguna demanda penal; 5) La firma que aparece en el recibo no es la mía
UFORN19302014 NEUTEDRAN230 2014 Cuasidario	10/03/2014 30/06/2014	UFORN 34/02/2014	19/03/2014	Por un tercero	NEUTEDRAN 23/02/2014 Cuasidario aplicado	19/09/2014	Personal					17/07/2014		SI	SI	SI	-	-	-	-	-	No recibí	-	documento porque no recibí dinero alguno; 2) Como ya lo mencioné no lo reconozco ni recibí dinero alguno; 3) Como ya lo he dicho en las dos preguntas anteriores no recibí dinero; 4) Negro el recibo, desconozco la firma y no he puesto ninguna denuncia penal; 5) La firma que aparece en el recibo no es la mía
UFORN19302014 NEUTEDRAN230 2014 Cuasidario	10/03/2014 30/06/2014	UFORN 34/02/2014	19/03/2014	Personal	NEUTEDRAN 23/02/2014 Oficial vocal	19/09/2014	Personal					17/07/2014		SI	SI	SI	-	-	-	-	-	No recibí	-	recibido nada ya que yo no recibí ningún dinero; 2) Los recibí yo no los dando confirmar nada ya que no recibí nada; 3) Se los voy a entregar y será las veces que sea necesario para que quede claro que no he recibido ningún monto de dinero; 4) Desconozco la firma del recibo y no he puesto demanda; 5) La firma que

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UJFORNA18302014	10/03/2014	UJFORNA 36482014	1-03-02-2014	Personal										1-03-02-2014	SI	SI	-	-	-	SI	No recibí.		Fue representante de casilla	En primer punto nunca estuve en actividades políticas en la campaña federal en el tiempo que ahí se menciona de mayo a junio, fui espectador de cada campaña presentada en la comunidad donde vivo, una semana antes de las elecciones me pidieron ser representante de casilla y por lo mismo desconozco en ese punto de tiempo mi firma la cual fue solicitada, nunca firmé con documento y desconozco la procedencia del mismo. Nunca he participado en actividades de representante de casilla, pero unos vecinos que son partidarios del partido me pidieron ayuda para conseguir la cual consistía en ser representante de casilla de momento. Desgraciadamente, como ya
UJFORNA18302014	10/03/2014	UJFORNA 36502014	1-03-02-2014	Por un tercero										1-03-02-2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí.		-	El recibí de reconocimiento es falso y desconozco para mí, pues nunca recibí dicho seguro y la firma estampada en el reconocimiento es totalmente falsa, además, de que no es mi firma.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (2)	FECHA SOLICITUD VOCAL (2)	1er OFICIO SOLICITUD (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DESCONOCER FIRMA DE RECIBO (37)	DESCONOCER CONTENIDO DE RECIBO (38)	DESCONOCER LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCER FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCER CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCER LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFGUNA19302014	10/03/2014	UFGUNA19302014	19/03/2014	Personal										14/03/2014	SI	SI	-	-	-	SI	-	No recibí.		servicios políticos en la campaña electoral en el tiempo que ahí me reconocen de mayo a junio, fue el representante de cada campaña presentada en la comunidad donde vivo, una semana antes de las elecciones me pidieron ser representante de casilla y por lo mismo desconozco en esas fechas de recibo ni firma la cual fue realizada, nunca firmé ese documento y desconozco la procedencia del mismo. Nunca he participado en actividades de representante de casilla, pero unos vecinos que son partidarios del partido me pidieron ayuda para esa día la cual consistía en ser representante de casilla de

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO SOLICITUD (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (40)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (41)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (42)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UJFERN19302014	10/03/2014	UJFERN19302014	18/03/2014	Personal										14/04/2014	SI	SI	-	-	-	-	SI	No recibí		Se me pidieron actividades políticas en la campaña electoral en el tiempo que aún se encontraba de mayo a julio, fui representante de cada campaña presentada en la comunidad donde vivo, una semana antes de las elecciones me pidieron ser representante de cañilla y por lo mismo desconozco en ese asunto de haber firmado la cual fue falsificada, nunca firmé ese documento y desconozco la procedencia del mismo. Nunca he participado en actividades de representante de cañilla, pero unos vecinos que son partidarios del partido me pidieron ayuda para ser de la cual constaba en ser representante de cañilla de Movimiento Progresista, y como yo no soy representante de ese partido me entregaron \$500.00 y se los pasó a Moya, pero solo me dio \$500.00. 2) En el día de las elecciones y el lugar fue la escuela reforma. 5) Que se sacara la cantidad de dinero que me dieron, y la habilitación de mi
UJFERN19302014 (NEUTERUM2014 Cuestionario)	03/03/2014 30/03/2014	UJFERN19342014	18/03/2014	Personal	NEUTERUM2014 Cuestionario aplicado	19/06/2014	Personal							17/07/2014	SI	SI	-	-	-	-	SI	No recibí		Lo entregaron \$500.00 y se los pasó a Moya, pero solo me dio \$500.00. 2) En el día de las elecciones y el lugar fue la escuela reforma. 5) Que se sacara la cantidad de dinero que me dieron, y la habilitación de mi

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN OMAR (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN OMAR (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LAJORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE QUÉ RECIBO (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LAJORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UJFORN18302014 NEUTERUM230 2014 Cuestionario	10/03/2014 06/06/2014	UJFORN 05/02/2014	18/03/2014	Personal	NEUTERUM 230-2014 Cuestionario aplicado	20/06/2014	Personal					17/07/2014		SI	SI	-	\$500.00	-		-	SI	No recibí	Recibí \$500.00 en efectivo de manos de Alfredo Ortega maestro de la U de G. 4) No ha realizado acciones penales aunque su firma no es esa del recibo. 5) Que si les voy a dar la diferencia.	1) No conozco ese documento. 3) Recibí \$500.00 en efectivo de manos de Alfredo Ortega maestro de la U de G. 4) No ha realizado acciones penales aunque su firma no es esa del recibo. 5) Que si les voy a dar la diferencia.
UJFORN18302014 NEUTERUM230 2014 Cuestionario	10/03/2014 06/06/2014	UJFORN 05/02/2014	18/03/2014	Personal	NEUTERUM 230-2014 Cuestionario aplicado	20/06/2014	Personal					17/07/2014		SI	SI	-	\$500.00	-		-	SI	No recibí	Recibí \$500.00 en efectivo de manos de Alfredo Ortega maestro de la U de G. 4) No ha realizado acciones penales, 5) Espero que lo paguen el día martes.	1) No finalice ese medio ratos, la firma no es suya. 3) Recibí \$500.00 en efectivo de manos de Alfredo Ortega maestro de la U de G. 4) No ha realizado acciones penales, 5) Espero que lo paguen el día martes.
UJFORN18302014	10/03/2014	UJFORN 05/02/2014	18/03/2014	Personal								24/03/2014		SI	SI	-	\$200.00	-		-	SI	No recibí	Recibí de Allan de Niverno una invitación para presentarme en las elecciones de julio de 2012 lo cual recibí ese día como vigilante de una casilla a favor del Partido de la Revolución Democrática pero yo no tengo ningún favoritismo por ese partido y por lo cual recibí \$200.00, un "bonche" y me lo entregaron al terminar las elecciones.	Recibí de Allan de Niverno una invitación para presentarme en las elecciones de julio de 2012 lo cual recibí ese día como vigilante de una casilla a favor del Partido de la Revolución Democrática pero yo no tengo ningún favoritismo por ese partido y por lo cual recibí \$200.00, un "bonche" y me lo entregaron al terminar las elecciones.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS											
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (24)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (25)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (26)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (27)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN ONARIO (28)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (29)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (30)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN ONARIO (31)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (32)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (33)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (34)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (35)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (36)	FECHA DE RESPUESTA (37)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (38)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (39)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (40)	RECONOCE QUI RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)		
UFFORN18382014	10/03/2014	UFFORN18382014	20/03/2014	Por un tercero										07/04/2014	SI	SI	-	\$200.00	-	-	SI	No recibí	Por representante de cailla		Señaló al PNO en las elecciones del 2012, para lo cual me fue solicitada una copia de mi credencial de elector. 5 días después de la elección recibí en la casa de campaña una compensación económica de \$200.00 por haber prestado mis servicios como representante de cailla. Por consiguiente, luego y al fin que en ningún momento firmé o llevé documento o recibí alguno y mucho menos recibí la cantidad que se informó que a mí no se me mandó entregar dinero alguno, porque yo no he participado en campañas políticas nunca, soy pobre pero muy honesta, si gusta venir a pedir informes sobre mi persona ya tiene mi domicilio. Han falsificado mi firma, no es la mía.
UFFORN18382014	10/03/2014	UFFORN18382014	19/03/2014	Personal										03/04/2014	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	-		

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE LABORES CON RECIBO (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)
UFORN18302014 NEUTORN0220 2014 Cuadrante	10/03/2014 06/06/2014 23/10/2014	UFORN 30/02/2014	20/03/2014 Personal	NEUTORN 23/02/2014 Oficial vocal	20/06/2014	Personal							17/07/2014	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	-	(1) Nunca había visto el recibo, 4 desconoce su firma no es, no he aplicado acciones penales; 5) Que según justicia si se da el dinero para que la acción, para que la acción.
UFORN18302014 NEUTORN0220 2014 Cuadrante	10/03/2014 06/06/2014 23/10/2014	UFORN 30/02/2014	20/03/2014 Personal	NEUTORN 23/02/2014 Oficial vocal	23/06/2014	No diligenciado	NEUTORN 24/02/2014	04/11/2014	Personal				20/11/2014	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	-	verificado que jamás recibí la cantidad de \$100.00 por parte de la comisión "Movimiento Progresista" según recibo de fecha 27 de junio de 2012, por lo que desconozco para los efectos legales conducentes la firma que aparece en el documento en cuestión, mediante la cual se compromete haber recibido tal cantidad.
UFORN18302014 NEUTORN0220 2014 Cuadrante	10/03/2014 06/06/2014 23/10/2014	UFORN 30/02/2014	20/03/2014 Personal	NEUTORN 23/02/2014 Oficial vocal	23/06/2014								03/04/2014	SI	SI	-	\$100.00	-	-	-	No recibí	Por representante de casilla	Se verificó el recibido la cantidad del referido, la participación en el proceso electoral 2012 fue una exclusivamente como observador por el PRD el día 1° de junio de 2012, en un horario de 8 a 20 hrs, en la casilla ubicada en la Escuela Francisco Ibañez, de la sección 0399, por el cual se me otorgó un

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS															RESPUESTA DE CIUDADANOS								
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGEN SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (29)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	RECONOCE FIRMAS DE RECIBO (37)	DISCONOCE FIRMAS DE RECIBO (38)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMAS DE RECIBO (40)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORN19302014 NEUTFOR022014 2014 Cuasidario	10/03/2014 06/03/2014	UFORN19302014 NEUTFOR022014 2014 Cuasidario	20/03/2014	Por un tercero	NEUTFOR022014 Cuasidario aplicado	20/03/2014	Personal							SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	-	1) Nunca lo había visto; 4) Nunca recibí esa cantidad, si es mi firma pero no reconozco haber recibido esa cantidad, no he presentado ninguna denuncia; 5) Ninguna.
UFORN19302014 NEUTFOR022014 2014 Cuasidario	10/03/2014 06/03/2014 23/10/2014	UFORN19302014 NEUTFOR022014 2014 Cuasidario	20/03/2014	Personal	NEUTFOR022014 Oficio al vocal	20/03/2014	No diligenciado	NEUTFOR022014 24/03/2014	03/11/2014	Personal		23/11/2014		SI	SI	-	-	-	-	SI	No recibí	Que en la jornada electoral del 2012 se llevó a cabo un traslado de la coalición como representante de la coalición Movimiento Progreso (PRD, PT, MC), pero no recibí ninguna cantidad de dinero, mucho menos los seis mil pesos que me señalan que recibí. Debido a esto, me voy a presentar a la coalición Movimiento Progreso (PRD, PT, MC), pero no recibí ninguna ayuda económica.	
UFORN02022014	12/03/2014	UFORN02022014	27/03/2014	Por un tercero								09/04/2014		SI	SI	-	-	-	-	SI	No recibí	Fue representante de la coalición	Que en la jornada electoral del 2012 se llevó a cabo un traslado de la coalición como representante de la coalición Movimiento Progreso (PRD, PT, MC), pero no recibí ninguna cantidad de dinero, mucho menos los seis mil pesos que me señalan que recibí. Debido a esto, me voy a presentar a la coalición Movimiento Progreso (PRD, PT, MC), pero no recibí ninguna ayuda económica.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO OMARO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO OMARO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LAJURES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LAJURES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORN02022014 UFORN14602014	12/03/2014 21/03/2014	UFORN02022014 32/03/2014	02/04/2014	No diligenciado								22/03/2014		S	S	S					Recibido		Se recibió el correo electrónico del 22 de marzo del 2014. Se le informó que el proceso para la entrega de la información solicitada se encuentra en trámite y se le avisará una vez se haya concluido.
UFORN02022014 NEUTERN022014	12/03/2014 08/03/2014	UFORN02022014 32/03/2014	27/03/2014	Por un tercero	NEUTERN022014 23/03/2014 Cuestionario aplicado	24/03/2014	Personal					17/07/2014		S	S	-		-	S	No recibido		(1) No lo reconoce, no es la firma. (2) Sin el estado de Jalisco. (3) Le dieron solo \$200.00 en efectivo. (4) No, no es su firma, no y todo que ya no vuelve a ayudarlos. (5) Se encuentra involucrada con el partido por no entregarlos.	
UFORN02022014 NEUTERN022014	12/03/2014 08/03/2014	UFORN02022014 32/03/2014	23/03/2014	Por un tercero	NEUTERN022014 23/03/2014 Oficial vocal	10/03/2014	Personal					16/07/2014		S	S	S		-		-	No recibido		(1) No sabe cuál sea su origen. (2) No participó en el proceso, solo le dieron que iba a ser representante general, le pidieron su CUF (sic) y no le entregaron. (3) No recibí pago alguno. (4) Desconoce la firma del partido y no ha denunciado el hecho. (5) Solicita se dé a conocer el hecho y no fue representante.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO CUESTIONARIO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO CUESTIONARIO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE QUE RECIBO (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)
UFORN02022014 (NEUTFORN022014 Cuestionario 2014)	12/03/2014 06/06/2014 23/10/2014	UFORN02022014 (NEUTFORN022014 Cuestionario 2014)	27/03/2014	Personal	NEUTFORN022014 Cuestionario 2014 Oficio al vocal	23/06/2014	No diligenciado	NEUTFORN022014 Cuestionario 2014	03/11/2014	Personal			23/11/2014	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	persona Marsella Bales sin consentimiento nombres de las personas para recibir dinero por la campaña o jornada electoral, bajo	compensación de servicios por \$600.00 por la compra de la comida Movimiento Progresista de los partidos políticos PRD, PT y MC Que en una persona Marsella Bales anda registrando consentimiento nombres de las personas para recibir dinero por la campaña o jornada electoral, bajo
UFORN02022014 (NEUTFORN022014 Cuestionario 2014)	12/03/2014 06/06/2014	UFORN02022014 (NEUTFORN022014 Cuestionario 2014)	25/03/2014	Personal	NEUTFORN022014 Cuestionario 2014 Cuestionario aplicado	08/07/2014	Personal						17/07/2014	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	-	1) No reconoce la firma. 4) No ha aplicado ninguna acción penal en contra de nadie. 5) Efectivamente no es su firma y no se le entregó dinero al ciudadano.
UFORN02022014 (NEUTFORN022014 Cuestionario 2014)	12/03/2014 06/06/2014	UFORN02022014 (NEUTFORN022014 Cuestionario 2014)	25/03/2014	Personal	NEUTFORN022014 Cuestionario 2014 Cuestionario aplicado	08/07/2014	Personal						17/07/2014	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	-	1) No reconoce la firma. 4) No ha aplicado ninguna acción penal. 5) Efectivamente no es su firma.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN OMAR (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN OMAR (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE QUE RECIBO (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORN02022014 (NEUTFRM022014 Cuestionario	12/03/2014 30/06/2014	UFORN02022014 30/12/2014	25/03/2014	Por un tercero	NEUTFRM02022014 23/06/2014 Cuestionario aplicado	26/06/2014	Personal							SI	SI	SI	-	-	-	-	-	No recibí	-	1) No es su firma, 4) No ejercí acción penal contra nadie, 5) Nunca recibí ningún dinero ni firma ningún recibo.
UFORN02022014 (NEUTFRM022014 Cuestionario	12/03/2014 30/06/2014	UFORN02022014 30/12/2014	25/03/2014	Personal	NEUTFRM02022014 23/06/2014 Cuestionario aplicado	26/06/2014	Personal							SI	SI	SI	-	-	-	-	-	No recibí	-	1) No acompaño la firma del notario, 4) No ejercí acción penal contra nadie, 5) Nunca recibí ningún dinero ni firma ningún recibo.
UFORN02022014 (NEUTFRM022014 Cuestionario	12/03/2014 30/06/2014	UFORN02022014 30/12/2014	25/03/2014	Por un tercero	NEUTFRM02022014 23/06/2014 Cuestionario aplicado	08/04/2014	Personal							SI	SI	SI	-	-	-	-	-	No recibí	-	1) No acompaño la firma, 4) No; 5) Que la firma no corresponde al ciudadano.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS															RESPUESTA DE CIUDADANOS								
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO/OCUEST ONARIO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO/OCUEST ONARIO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)
UFERN03022014	12/03/2014	UFERN03042014	25/03/2014	Personal										08/04/2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	My hago saber que yo no participo en ningun momento firme nada ningun documento en el cual where algun pago.
UFERN03022014 UFERN14022014	12/03/2014 21/03/2014	UFERN03032014	03/04/2014	No diligenciado										10/03/14	SI	SI	-	-	-	SI	Recibido	-	1.- Si participo como representante del PFD en las elecciones del 2012 como representante del partido ante el FE, para lo cual me fue pedida una copia de mi cedula de vecedor y mi asistencia a las reuniones de conego. 2.- Desde despues de la eleccion nos reunimos en la casa de campaña donde se les estaba brindado una compensacion economica a todos los que decidieron apoyar en la eleccion, en mi caso no asiste pago por mi participacion ya que lo hice por simpatia al partido, y en ningun momento firme o lleve documento alguno. Asi que desconozco

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS											
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN OMARDO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN OMARDO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE QUE RECIBO (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORN02022014	12/03/2014	UFORN02022014	27/03/2014	Por un tercero								07/04/2014			SI	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	-	Alvaro que en ningún momento yo recibí dicho dinero, y que la firma que viene en el documento de la recepción con número de folio 0468 es totalmente falsa. No obstante yo no soy militante de dicho partido, por lo que no tendría porque recibir ninguna prestación o reconocimiento por ninguna actividad política.
UFORN02022014 (NEUFORN022014 Cuasileano	10/03/2014 06/06/2014	UFORN02022014	27/03/2014	Personal	NEUFORN022014 Cuasileano aplicado	24/06/2014	Personal					17/07/2014			SI	SI	-	-	-	-	SI	No recibí	Habían quedado en la endebería la cantidad de \$200.00 y al final no les dieron nada al igual que a sus compañeros.		
UFORN02022014	12/03/2014	UFORN02022014	20/03/2014	Personal								20/03/2014			SI	SI	-	-	-	-	SI	No recibí	Ayer al momento Programar pero que en ningún momento recibí dinero destinado hacia mi persona, y que la firma que aparece en dicho documento no es la firma, al parecer alguien al que le dio el dinero destinado a mi persona, pero solo se parece y estoy dispuesto a que se lleve un peritaje grafotécnico y se analice que data		

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGEN SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (40)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (41)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (42)	RESPUESTA (43)	OBSERVACIONES (44)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (45)	
UFORN02022014	12/03/2014	UFERN02022014	21/03/2014	Por un tercero										03/04/2014	SI	SI	SI		-	-	-	No recibí	-	Niego rotundamente haberlo recibido y al ver la firma observo que es totalmente falsa.
UFORN02022014	12/03/2014	UFERN02022014	20/03/2014	Personal										28/03/2014	SI	SI	-				SI	No recibí	Por representante de castilla por el PRQ.	Se suspendió la figura de alcalde durante el periodo 15 de mayo del 2012 al 27 de junio del 2012, por lo tanto, no recibí la cantidad mencionada, sin embargo, participé únicamente como representante de castilla por el Partido de la Revolución Democrática el día de la elección, solamente recibí la cantidad de 200 pesos y la comí, por lo que desconozco el periodo de monederos por el cual se recibiese el dinero.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS															RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGEN SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFFORN02022014	12/03/2014	UFFORN04422014	21/03/2014	Personal										23/03/2014	SI	SI	-	-	-	-	SI	Ne recibí	Fue representante de casilla por el PRQ.	Se suspendió la actividad política durante el periodo 15 de mayo del 2012 al 27 de junio del 2012, por lo tanto, no recibí la cantidad mencionada, sin embargo, participé únicamente como representante de casilla por el Partido de la Revolución Democrática el día de la elección, solamente recibí la cantidad de 200 pesos y la comide, por lo que desconozco el monto de moneditas por	En ningún momento recibí esa cantidad de dinero, solo recibí la cantidad de \$200.00 la cual fue pagada en efectivo de manera personal por Julia Alejandra García Morán.
UFFORN02022014	12/03/2014	UFFORN04432014	20/03/2014	Personal										23/03/2014	SI	SI	-	-	-	-	-	Ne recibí	Solo recibí la cantidad de \$200.00 la cual fue pagada en efectivo de manera personal por Julia Alejandra García Morán.	En ningún momento recibí esa cantidad de dinero, solo recibí la cantidad de \$200.00 la cual fue pagada en efectivo de manera personal por Julia Alejandra García Morán.	
UFFORN02022014	12/03/2014	UFFORN04422014	21/03/2014	Por un tercero										23/03/2014	SI	SI	-	-	-	-	-	Ne recibí	Solo recibí la cantidad de \$200.00 la cual fue pagada en efectivo de manera personal por Julia Alejandra García Morán.	En ningún momento recibí esa cantidad de dinero, solo recibí la cantidad de \$200.00 la cual fue pagada en efectivo de manera personal por Julia Alejandra García Morán.	

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS											
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN (27)	FECHA NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN (30)	FECHA NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE RECIBO (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFERN02022014	12/03/2014	UFERN04022014	2003/2014	Personal										2003/2014	\$	\$	\$	\$	-	-	-	-	No recibí	-	Admito, al final ningún documento ni participe en ninguna cabilia. Admito la firma que viene en el documento donde supuestamente yo firmo no es mi firma porque yo no firmé ningún documento, esa firma es falsa. Yo nunca estuve enterado que el PRR había dado dinero por participar a las cabilas. Espero que tengan las
UFERN02022014 UFERN14022014	12/03/2014 21/03/2014	UFERN04022014 04/03/2014	2003/2014 designado	No										22/03/2014	\$	\$	-	-	\$200.00	-	-	SI	No recibí	Solamente les ayudo el día de la elección y le doy \$200.00	Admito que yo no recibí los \$200.00 pesos que dice en el papel que recibí yo solamente les ayudo el día de las elecciones y nada más y por eso me dieron \$200.00

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN OMARRO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN OMARRO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFGORN020202014 PNEUTTFORN0202014 2014 Cuatrimano	12/03/2014 30/03/2014	UFGORN020202014 30/03/2014	24/03/2014	Personal	UFGORN020202014 23/03/2014 Cuatrimano aplicado	23/05/2014	Personal					17/07/2014		SI	SI	SI	-	-	-	No recibí.			que que el recibo no corresponde a ningún beneficio económico recibido por mi parte para actividades políticas en campaña federal, no tengo conocimiento de la providencia donde se acusa el recibo de recepción del recurso; 2. No existe la actividad mencionada en esta pregunta; 3) Ratifico mi respuesta, al desconocer la providencia del recibo, donde se presume mi firma de recepción del recurso económico; 4) Al momento no se ha ejercido acción penal por desconocer la firma del recibo; 5) Se entregó anexo al presente cuestionario copia simple de la certificación (credencial para votar) al momento de la presunta firma del recibo, y copia simple de la credencial para votar actual, en la

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS															RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN ONARIO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN ONARIO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORN03032014 VOCAL (NEUTORN022014) 2014 Cuadrante	13/03/2014 30/03/2014	UFORN03042014	21/03/2014	Personal	NEUTORN03052014 Cuestionario aplicado	19/03/2014	Personal							17/07/2014	SI	SI	SI		-	-	No recibido			1) El recibo es falso, no es la firma, no le entregaron y no fue el mismo día. 3) No hubo pago. 4) Una vez más, me encuentro en la oficina, pero no me encuentro en la oficina, por lo tanto, la firma y no hubo entrega de dinero.
UFORN03032014 VOCAL (NEUTORN022014) 2014 Cuadrante	13/03/2014 30/03/2014	UFORN03082014	25/03/2014	No diligenciado										03/03/2014	SI	SI	SI				Ne recibio	La cantidad recibida de \$9,000.00, ni ninguna otra cantidad de dinero, así como mucho menos, para el documento de la entrega del recibo, en la cual aparece el número 1700000000.		
UFORN03032014 VOCAL (NEUTORN022014) 2014 Cuadrante	13/03/2014 21/03/2014	UFORN03082014	25/03/2014	No diligenciado										03/03/2014										Requiere el total del dinero, la cantidad de \$9,000.00, y que si firma el recibo para el PND Comite Espurano REPAP-CCA, número 6355; a la E. del Estado Jalisco, para que el importe me fue por organizar, coordinar y convalidar convalidar y

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGEN SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (27)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN (28)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (29)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (30)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN (31)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (36)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORN0632014	13/03/2014	UFORN0632014	20/03/2014	Personal										27/03/2014	\$	\$	-	-	-	\$	No recibí	El partido le pidió para socio mobiliario para asistir en las votaciones, de su parte solicito \$200.00 en efectivo solo por el día de las votaciones.	Nunca recibí tal cantidad de dinero, yo no pertenecí a nada en ese Partido Político, el partido me pidió ayuda para asistir en las votaciones, de su parte solicito \$200.00 en efectivo solo por el día de las votaciones.
UFORN0632014 (NEUTORN023014 Cuasiletrado)	13/03/2014	UFORN0632014	20/03/2014	Personal	NEUTORN023014 Cuasiletrado aplicado	17/05/2014	Personal							17/07/2014	\$	\$	-	-	-	\$	No recibí	Como asistente electoral le dieron \$200.00 y le deben \$200.00.	(1) No lo reconozco; 2) Como asistente electoral; 3) En efectivo \$200.00; 4) No; 5) Me deben \$200.00

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFEORNO0632014 INEUTFORM023914 Cursado INEUTFORM023914	13/03/2014 08/05/2014 23/10/2014	07/03/2014	20/03/2014	Personal	NEUTFORM023914 Oficio al vocal	20/05/2014	No diligenciado		03/03/2014														Algun reconocimiento por actividades políticas de Campaña electoral. Cabe mencionar que en dicho se encuentra una página anexada supuestamente firmada por mí. Describo este asunto dando a conocer que la firma encontrada no coincide con mi firma actual, desconociendo por esta ocasión la firma en el documento, por ende hago la importante aclaración respecto a mi participación en la política, no he estado involucrado en ninguna actividad política.
UFEORNO0632014	13/03/2014	UFEORNO0632014 07/4/2014	21/03/2014	Personal					03/04/2014												No recibí		No participé como representante del PRD el día 27 de junio entre 8 am y 3:30 pm, yo recogí papeles y entregué a oficinas del PRD porque yo era la única representante del partido y no sé si que tenía que recoger los papeles y solo me dieron \$200.00. Anexo y comento.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (28)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORN030632014 NEUTERN023014 Cuestionario	13/03/2014 06/06/2014	UFORN030632014 07/06/2014	20/03/2014	Personal	NEUTERN030632014 23/06/2014 Oficial vocal	17/06/2014	Personal					17/07/2014		SI	SI	-	-	-	-	SI	No recibí	Como asistente delador lo demuestran el valor de \$200.00 y le deben \$200.00	(1) No reconozco; (2) Participo con el pago como asistente delador; (3) Si reconozco \$200.00; (4) No; (5) Que le deben \$200.00
UFORN030632014 NEUTERN023014 Cuestionario	13/03/2014 06/06/2014	UFORN030632014 07/06/2014	20/03/2014	Personal	NEUTERN030632014 23/06/2014 Cuestionario aplicado	17/06/2014	Personal					17/07/2014		SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	(1) No tengo idea del origen del recibo; (2) No me dieron ningún pago; (3) No he ejido acción penal; (4) No me dieron la cantidad que se reclama y no recuerdo haber firmado la hoja del recibo y no recuerdo que esa mi firma.		
UFORN030632014		UFORN030632014 08/06/2014	21/03/2014	Por un tercero								31/03/2014		SI	SI	-	-	-	-	No recibí	-	compensación económica por mi labor durante las pasadas elecciones federales a las que ellos no firmaron recibo de pago, por el modo cobrado de la manera más sencilla que se castigue a quien resulte responsable del delito aquí cometido del que he sido víctima y	

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN OMAR (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN OMAR (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)
UFORN00632014	13/03/2014	UFORN00632014	21/03/2014	Por un tercero										31/03/2014	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	-	compensación económica por mi labor durante las pasadas sesiones fedratas a las que ellos repodente hace referencia y que yo no firmé ningún recibo de pago, por el modo debido de la manera indebenta que se castigue a quien resulte responsable del delito aquí cometido del que he sido víctima x
UFORN00632014	13/03/2014	UFORN00632014	20/03/2014	Por un tercero										07/04/2014	SI	SI	-	-	-	SI	No recibí	Fue representante de casilla	No recibí esa cantidad, lo que recibí fueron \$200.00, yo entregué el comprobante de pago de casilla y la firma que aparece en el recibo se parece a la mía mas no es, se ve calada y nunca firme nada.
UFORN00632014	13/03/2014	UFORN00632014	20/03/2014	Personal										31/03/2014	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	-	compensación económica por mi labor durante las pasadas sesiones fedratas a las que ellos repodente hace referencia y que yo no firmé ningún recibo de pago, por el modo debido de la manera indebenta que se castigue a quien resulte responsable del delito aquí cometido del que he sido víctima x

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN OMARCO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN OMARCO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (36)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (40)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORN00832014 NEUTRO(230) 2014 Cuasidato	13/03/2014 06/06/2014	UFORN038602014	2003/2014	Personal	NEUTRO(230) 230/2014 Cuasidato aplicado	17/06/2014	Personal							SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	1) No reconoce el recibo; 4) No reconoce; 5) Dos no haber recibido ningún dinero de lo que se afirma en el recibo y falsificaron su firma.	
UFORN00832014 NEUTRO(230) 2014 Cuasidato	13/03/2014 06/06/2014	UFORN038602014	2003/2014	Personal	NEUTRO(230) 230/2014 Cuasidato aplicado	17/06/2014	Personal							SI	SI	-	-	-	-	SI	No recibí	Lo dieron \$200.00	1) No reconoce; 3) Me dieron \$200.00 solamente; 4) No ha presentado recibo; 5) Que por el momento, no.
UFORN00832014		UFORN038602014	21/03/2014	Personal										SI	SI	-	-	-	-	SI	No recibí	Participo como representante del PPD.	1) No reconoce; 3) Me dieron \$200.00 solamente; 4) No ha presentado recibo; 5) Que por el momento, no.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	ORIGEN SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE RESPUESTA (34)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE QUI RECIBO (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFERN06302014 NEUTERN022014 2014 Cuadrante	13/03/2014 06/06/2014	UFERN06302014 02/02/2014	2003/2014	Personal	NEUTERN022014 23/06/2014 Cuadrante #03/04/20	03/07/2014	Personal					17/07/2014	\$	\$	-	\$200.00	-	-	\$	No recibí	Primera vez que participo con el PRD y estubo como representante de partido y solo le dieron \$200.00 y un instante, desahuyó y comida.	1) Deseo el documento y la firma no es suya. 4) No considero necesario acción penal, dado que es primera vez que tiene a la vista el documento. 5) Primera vez que participo con el PRD y estubo como representante de partido y solo le dieron \$200.00 y un instante, desahuyó y comida.	
UFERN06302014	13/03/2014	UFERN06302014 02/02/2014	21/03/2014	Personal								03/04/2014	\$	\$	-	\$200.00	-	-	\$	No recibí	Participo como representante del PRD.	Desearía por favor solo me denon \$200.00 y la comida, y no me denon ningún papel donde diga que me dieron un billete de \$200.00, el día de las elecciones únicamente fui a la casilla a estar checando que el sistema la persona que estaba en la lista, los que me pusieron ahí eran del PRD porque andaba	

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN ONARIO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN ONARIO (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN ONARIO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)		
																							con el Partido de la Revolución Democrática a lo que se menciona en el punto dos, nunca existió una relación laboral ni esporádica y contractual. De igual forma, hago constar que la credencial de elector (...) expedida por el Instituto Federal Electoral, en el periodo que se menciona, siempre estuvo conmigo y desconozco situación alguna, que persona alguna hubiese realizado en su nombre. A lo que desconozco y me abstengo de cualquier declaración de responsabilidad que me atribuyan.	
UFORN20832014 UFORN14802014	13/03/2014 21/03/2014	UFORN235032014 09/02/2014		No diligenciado																				
UFORN21592014 (NEUTRO)02/2014 2014 Cuestionario	13/03/2014 21/03/2014	UFORN21592014 02/02/2014		Personal	NEUTRO Cuestionario 09/03/2014	17/06/2014	Personal							17/07/2014	\$	\$1	-	\$200.00		\$	No recibí. Se dió en dinero \$200.00			1) No le diaron cantidad; 2) Nunca recibí la cantidad señalada; 3) Recibí solo \$200.00 en efectivo; 4) No sé si envió una admisión; 5) Se encuentra muerta.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS								
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGEN SOLICITUD VOCAL (24)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (25)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (26)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (27)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN (28)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (29)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (30)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN (31)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)
UFFORN21592014	19/03/2014	UFFORN/ 16/3/2014	29/03/2014	Personal									03/04/2014	SI	SI	-	-	-	SI	No recibí	Participó como representante del PRQ.	En este documento no es la mía, para recibir la cantidad aquí reconocida, solo tengo que ir a la comunidad de casta en la ciudad de Masaten en las elecciones de junio de 2012, la C. Elizabeth Medina Hernández me reconoció para cobrar mis servicios como cuidadora de celda en el PRQ, el C. José Luis Cortez se le entregó copia de mi identificación oficial y quien nos dio la capacitación y del C. Roberto Arce, Masaten, Guatemala.
UFFORN21592014	19/03/2014	UFFORN/ 16/4/2014	31/03/2014	Personal									14/04/2014	SI	SI	-	-	-	SI	No recibí	Participó como representante de la celda.	Desconozco totalmente ya que yo solo estuve el día de las elecciones como representante del partido pero ya no se me pago nada por lo que me ingresó de lo que son sueldos de hacer pues han falsificado mi firma porque esa no es mi firma y deseo que se encuentre al responsable de dichos delitos.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS															RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGEN SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN OMARCO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN OMARCO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (40)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORNQ1502014	10/03/2014	UFORNQ1502014	28/03/2014	Personal										11/04/2014	SI	SI	-	-	-	-	-	No recibí	Participé como representante de casilla.	agrupó por la Coalición Movimiento Progresista; siendo pues falso desde estos momentos desconozco el supuesto recibo de reconocimiento por actividades políticas de campaña Federal, ya que como lo manifesté con anterioridad nunca me fue entregado el supuesto dinero que allí se señala, desconociendo desde estos momentos también la firma que aparece en el mismo, ya que no me la mite, la verdad de los hechos es que al día de la voz me invitaron que si les hacía el favor de cuidar una casilla el día de las elecciones 2012, por parte del partido político PRD, a lo cual accedí ya que conocía al candidato Presidente Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco. Se entregó copia de mi credencial y se entregó copia de mi

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS															RESPUESTA DE CIUDADANOS												
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGEN SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN OMARDO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN OMARDO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE QUE RECIBO (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)			
	19/03/2014	UFORNQ1592014 16/7/2014	31/03/2014	Por un tercero	NEUTRO/NO Cuestionario aplicado	25/06/2014	Personal							17/07/2014	SI	SI	-	-	-	-	SI	No recibí	Primera y última vez que las ayudo a los del partido, desconozco el origen del recibo; 4) No lo he denunciado, envié la respuesta del mismo partido PRD; 5) No es mi firma, yo no recibí ningún pago, yo lo ayudo económicamente.			1) Primera y última vez que las ayudo a los del partido, desconozco el origen del recibo; 4) No lo he denunciado, envié la respuesta del mismo partido PRD; 5) No es mi firma, yo no recibí ningún pago, yo lo ayudo económicamente.	
																											Ne recibí dinero a cambio de mi voto, yo solamente me presenté a votar cumpliendo mi deber. La firma que aparece en el documento que presenté los representantes del PFE no es mía.
																											Desconozco el pago del Partido de la Revolución Democrática, basándose en mi firma quise comprobar que yo recibí ese pago pero en realidad yo no lo recibí.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO CUERPO OMAR (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO CUERPO OMAR (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE RECIBO (40)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (41)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (42)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)
UFORN21592014 INEUTFRM230 2014 Cuestionario	10/03/2014 09/06/2014	UFORN2 17/02/2014	31/03/2014	Personal	NEUTRON 23/03/2014 Cuestionario aplicado	25/09/2014	Personal							17/07/2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	1) Desconoce el origen del recibo, en su vida había visto el recibo. 4) No reconoce su firma en el recibo es prefabricada, es la primera vez que lo tiene a la vista. 5) Que no se alegan de que tienen conocimiento de nuestra credencial para hacer cosas que a las personas pueden perjudicar.
UFORN21592014	10/03/2014	UFORN2 17/02/2014	31/03/2014	Personal										14/04/2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	No recibí cantidad alguna y es la primera vez que veo este recibo y en la cual desconozco la firma y su procedencia. Solo me concentro en saber que si no lo firmo ni recibí nada no anexo nada.
UFORN21592014 INEUTFRM230 2014 Cuestionario	10/03/2014 09/06/2014	UFORN2 17/02/2014	31/03/2014	Personal	NEUTRON 23/03/2014 Cuestionario aplicado	25/09/2014	Personal							17/07/2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	4) La firma no me parece y no es la mía, no la he visto antes. 5) En el acto entrega acción penal. 6) En el acto entrega copia de un escrito el cual me entregó a la UFRPP, dicho documento se entregó a la gente de la PREPA, cuyo nombre no recuerdo para que se lo hiciera llegar a quien

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (40)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)
U.FORN/1592014	10/03/2014	U.FORN/1792014	29/03/2014	Personal										15/04/2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	Disconozco y luego que la firma que se encuentra en dicho documento sea mía. Para tales efectos, adjunto una planilla de firmas para que se practique el peritaje caligráfico correspondiente. En el mismo tenor, luego haber recibido suma de dinero y pago en especie por prestación de servicios o trabajo alguno.
U.FORN/1592014	10/03/2014	U.FORN/1792014	29/03/2014	Personal										02/04/2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	No he recibido cantidad alguna así como las firmas están alteradas y yo jamás heba tenido dicho recibo por la cantidad de \$9.000,00 y mucho menos firmado.
U.FORN/159752013 INEUFORN/1592014 Cuestionario	30/12/2013 19/05/2014	U.FORN/18762013	1/02/2014	Personal	NEUFORN/1592014 06/03/14 Oficial vocal	12/02/2014	Personal							14/03/2014	SI	SI	-	-	-	SI	No recibí	El representante del representante general de casilla para ANC, pero no he recibido el finno ni recibido nada.	1) Manifiesta que la firma que aparece en el recibo no es la suya 4) Manifiesta que no ha ejercido ninguna acción penal; 5) Manifiesta que participó como representante general de casillas en las elecciones federales con el Partido Movimiento Ciudadano pero que nunca recibió el pago de \$4.200,00. 6) No recibí ninguno.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO ONARIO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO ONARIO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORN6972013 INEUFORN19562 P14 Questionario	30/12/2013 19/05/2014	UFORN6972013 30/12/2013	09/02/2014	Personal	NEUFORN19562 06/03/14 Oficial vocal	11/09/2014	Personal							9/4/09/2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-		Manifiesta que la firma que aparece en el recibo modificado no es suya; 4) Manifiesta que no ha recibido ninguna acción penal; 5) El ciudadano manifiesta que nunca ha participado en ninguna campaña política ni ha firmado ningún recibo por apoyo económico.
UFORN6972013		UFORN6972013 30/12/2013	09/02/2014	Personal										18/02/2014	SI	SI	-	-	-	SI	-	No recibí	Trabajo en Campaña	Dirijo, trabajo en campaña, pero nunca recibí dicha cantidad. Mi firma fue falsificada
UFORN6972013 INEUFORN19562 P14 Questionario	30/12/2013 19/05/2014	UFORN6972013 30/12/2013	10/02/2014	Personal	NEUFORN19562 06/03/14 Oficial vocal	12/09/2014	Personal							9/4/09/2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-		1) Manifiesta que la firma que aparece en el recibo modificado no es suya; 4) Manifiesta que no ha recibido ninguna acción penal; 5) Manifiesta que nunca ha participado en ninguna campaña política ni ha firmado ningún recibo por apoyo económico.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS								
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)
UFORN/987/2013	30/12/2013	UFORN/987/2013	09/02/2014	Por un tercero								18/02/2014		SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	No recibí conocimiento del recibo, ya que dicho recurso económico que así se menciona NO LO RECIBÍ, además hago saber que la rubrica que está plasmada en dicho recibo NO ES MI FIRMA, lo cual hace suponer que fue falsificada
UFORN/987/2013	30/12/2013	UFORN/987/2013	1/20/2/2014	Personal								24/02/2014		SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	Solicitó que se rectifique el origen del acuse de recibo con lo que así se menciona con la de la cantidad la cual envío en copia. Ya que en ningún momento he recibido dicha cantidad por el partido Movimiento Progresista
UFORN/987/2013	30/12/2013	UFORN/987/2013	1/20/2/2014	Personal								24/02/2014		SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	Solicitó que se rectifique el origen del acuse de recibo con lo que así se menciona con la de la cantidad la cual envío en copia simple. Ya que en ningún momento recibí dinero alguno por dicho partido. En donde mi firma fue falsificada

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORN6972013 INEUFORN19562 P14. Questionario	30/12/2013 19/05/2014	UFORN6972013 30/12/2013	1/20/2014	Personal	UFORN6972013 30/12/2013							24/02/2014			SI	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	Indicó que se recibiera el origen del acuse de recibo con respecto a la firma con la de mi cónyuge. La cual envío en copia simple. Ya que en ningún momento recibí dinero alguno por dicho partido. En donde mi firma fue falsificada
UFORN6972013 INEUFORN19562 P14. Questionario	30/12/2013 19/05/2014	UFORN6972013 30/12/2013	09/02/2014	Personal	INEUFORN19562 30/12/2014 Oficial vocal	10/09/2014	Personal					04/03/2014			SI	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	1) El ciudadano manifestó que no se le entregó ningún recurso económico. 4) No ha ejercido acciones penales. 5) El ciudadano manifestó que la actividad que realizó lo hizo con ningún interés y que no se sabe que informen esa cantidad que nunca recibí y que falsifiquen su firma.
UFORN6972013 INEUFORN19562 P14. Questionario	30/12/2013 19/05/2014	UFORN6972013 30/12/2013	09/02/2014	Personal	INEUFORN19562 30/12/2014 Oficial vocal	10/09/2014	Personal					04/03/2014			SI	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	Recibí alguna cantidad que indica el recibo de reconocimiento por actividades. 4) No ha ejercido acciones penales. 5) Dica el ciudadano que siempre se le apoyó a los dirigentes del partido en algún interés porque en el partido no hay dinero por la razón no se pagan y no se sabe que falsifiquen

3625

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS											
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	RECONOCE FIRMAS DE RECIBO (36)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (37)	RECONOCE LADERES CON PARTIDO (38)	RECONOCE LADERES CON PARTIDO (39)	RECONOCE QUI RECIÓ (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LADERES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORM6972013 NEUFORM19562 914 Cuadrante	30/12/2013 19/05/2014	UFORM6972013 30/12/2013	1/20/2014	Personal	NEUFORM19562 30/12/2013 Oficial vocal	11/05/2014	Personal								SI	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	-	1) El ciudadano manifiesta que no recibió ninguna cantidad especificada en el recibo de reconocimiento por actividades; 4) No ha ejecutado acciones pendientes al respecto; 5) Ciudadano se encuentra pendiente por las acciones tomadas de la aplicación de firma, cuando no se le ha otorgado documento para que firme.
UFORM6972013	30/12/2013	UFORM6972013 30/12/2013	2/30/1/2014	Personal											SI	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	-	Manifiesta que ignora y desconoce el documento, ya no lo firmó y por tanto no reconoce la validez del mismo y se dista de cualquier responsabilidad
UFORM6972013	30/12/2013	UFORM6972013 30/12/2013	2/30/1/2014	Personal											SI	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	-	Manifiesta que ignora y desconoce el documento, ya no lo firmó y por tanto no reconoce la validez del mismo y se dista de cualquier responsabilidad

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN OMARDO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN OMARDO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DESCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DESCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DESCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)
UFORN69752013	30/12/2013	UFORN69752013	06022014	Personal										18/02/2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	Me permito extender que desconozco alguna actividad política realizada en el pasado proceso electoral 2012, por el mismo declaro que la firma que se encuentra plasmado en este documento no la reconozco como tal, siendo una firma falsificada y el cual me distingo de cualquier responsabilidad que de ella pueda derivarse.
UFORN69752013	30/12/2013	UFORN69752013	23012014	Personal										20/02/2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	Me permito extender que desconozco y rechazo haber firmado algún recibo por la realización de alguna actividad política en el pasado proceso electoral 2012, por tanto reconozco la validez de tal recibo considerándolo un documento legal y verdadero.
UFORN69752013	30/12/2013	UFORN69752013	04022014	Personal										20/02/2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	Me permito extender que desconozco y rechazo haber firmado algún recibo por la realización de alguna actividad política en el pasado proceso electoral 2012, por tanto reconozco la validez de tal recibo considerándolo un documento legal y verdadero.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS															RESPUESTA DE CIUDADANOS											
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN OMARDO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN OMARDO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE LABORES CON RECIBO (40)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (41)	RECONOCE RESPUESTA (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)		
UFORN096752013	32/01/2013	UFORN096752013	09/02/2014	Personal										2/02/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-			Me permito extender que desconozco y rechazo haber firmado algún recibo por la realización de alguna actividad política en el pasado proceso electoral 2012, por tanto reconozco la validez de tal recibo considerándolo un documento legal y válido.
UFORN096752013	32/01/2013	UFORN096752013	12/02/2014	Personal										2/02/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-			Me permito extender que desconozco y rechazo haber firmado algún recibo por la realización de alguna actividad política en el pasado proceso electoral 2012, por tanto reconozco la validez de tal recibo considerándolo un documento legal y válido.
UFORN096752013	32/01/2013	UFORN096752013	28/01/2014	Por un tercero										11/02/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-			Me permito extender que desconozco y rechazo haber firmado algún recibo por la realización de alguna actividad política en el pasado proceso electoral 2012, por tanto reconozco la validez de tal recibo considerándolo un documento legal y válido.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS															RESPUESTA DE CIUDADANOS								
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGEN SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO ONARIO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO ONARIO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)
UFORN6972013	30/12/2013	UFORN6972013	10/02/2014	Por un tercero										24/02/2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	Ninguno los hechos por ser falsos, así que no confirmo ni refuto, el asunto es como es falso que se me haya entregado la cantidad de \$3.400.00 por concepto de Reconocimiento por Actividades Políticas en Campaña Electoral, mandándole mi dinero de apoyo acción legal que en su debido momento
UFORN6972013	30/12/2013	UFORN6972013	28/01/2014	Por un tercero	NEUFORN19502	13/02/2014	Personal							04/02/2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	1) Manifesta que la firma que aparece en el medio no es la suya. 4) Manifesta que no ha seguido ninguna acción penal. 5) Manifesta que ella no ha participado en ninguna campaña electoral por lo tanto no ha recibido ningún pago de apoyo económico.
UFORN6972013	30/12/2013	UFORN6972013	07/02/2014	Personal										24/02/2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	Ninguno los hechos por ser falsos, así que no confirmo ni refuto, el asunto es como es falso que se me haya entregado la cantidad de \$3.400.00 por concepto de Reconocimiento por Actividades Políticas en Campaña Electoral, mandándole mi dinero de apoyo acción legal que en su debido momento

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS											
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	DISCONOCE LA FIRMAS CON PARTIDO (36)	DISCONOCE LA FIRMAS CON PARTIDO (37)	DISCONOCE LA FIRMAS CON PARTIDO (38)	DISCONOCE LA FIRMAS CON PARTIDO (39)	RECONOCE LA FIRMAS CON PARTIDO (40)	RECONOCE LA FIRMAS CON PARTIDO (41)	RECONOCE LA FIRMAS CON PARTIDO (42)	RECONOCE LA FIRMAS CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORN6972013	02/12/2013	UFORN6972013	30/07/2014	Personal											SI		SI	SI	-			-	No recibí	-	En ningún momento he recibido algún apoyo o pago alguno, como Coordinador de la Campaña Piedad y tampoco de manera repetitiva he firmado este documento que me sirven con el monto de \$3,400.00 X que esa firma que aparece no es mi firma.
UFORN6972013 INEUFORN19562 PH-Comisario	02/12/2013 19/05/2014	UFORN6972013	30/07/2014	Personal	NEUFORN19562 06/20/14 Oficial vocal	13/09/2014	Personal	Personal							SI		SI	SI	-			-	No recibí	-	1) Manifiesta que la firma que aparece en el recibo mostrado no es la suya; 4) Manifiesta que no ha presentado ninguna acción penal; 5) Manifiesta que no ha recibido ningún tipo de apoyo económico ni pago de servicios.
UFORN6972013 INEUFORN19562 PH-Comisario	02/12/2013 19/05/2014	UFORN6972013	1/02/2014	Por un tercero	NEUFORN19562 06/20/14 Oficial vocal	13/09/2014	Personal	Personal							SI		SI	-				SI	No recibí	-	1) Manifiesta que ella no ha firmado ningún recibo por dicha cantidad, ni en su firma la que aparece en el recibo mostrado; 4) Manifiesta que no ha presentado ninguna acción penal; 5) Manifiesta que si participó en la campaña de Diputados Federales, pero no recibió ningún apoyo económico ni pago de Diputados Federales, pero no recibió ningún apoyo económico ni ningún pago.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
U.FORN/697/2013 INE/UFORN/1956/2014 P14. Cuestionario	30/12/2013	U.FORN/697/2013 09/05/2013	07/02/2014	Personal	NE/UFORN/1956/2014 06/05/14 Oficial vocal	16/05/2014	Personal							04/03/2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	1) Manifiesta que la firma que aparece en el recibo no es la de él. 2) Manifiesta que no ha presentado ningún recurso penal; 3) Manifiesta que no ha participado en ninguna campaña política ni ha recibido ningún recurso económico.	
		U.FORN/697/2013 07/02/2013	23/01/2014	Por un tercero										12/03/2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	No recibí ningún pago del cual se derive noticia.	
U.FORN/697/2013	30/12/2013	U.FORN/697/2013 09/05/2013	07/02/2014	Personal										24/02/2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	1) Niega los hechos por falsos, ya que no confirma ni ratifica el recibo; 2) Niega haber recibido el dinero; 3) Niega la firma que aparece al cargo del recibo.	

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA OFICIO NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN (27)	FECHA OFICIO NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN (30)	FECHA OFICIO NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA OFICIO NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFFORN0672013 NEUTRO/NO 2014	30/12/2013	UFFORN 71/12/2013	04/02/2014	No asignado	NEUTRO/NO 5/8/2014	14/11/2014	Personal					12/12/2014		SI	SI	SI	-	-	-	No recibí			11.- Niego los recibos por ser falsos así que no confirmo ni ratifico el acuse de recibo descrito en el campo del oficio; 02.- Se niegan los recibos, en virtud de ser falso que se me haya entregado la cantidad de \$2,600.00 por concepto de reconocimiento por actividades políticas en campaña federal 03.- Lo niego; 04.- Manifiesto bajo protesta la veracidad de lo que firmo, así como la veracidad de la cantidad de dinero que se me quiere regular de manera diversa y fraudulenta, por lo que niego la firma que aparece al final del recibo.
UFFORN0672013	30/12/2013	UFFORN 71/12/2013	23/01/2014	Por un tercero								27/01/2014		SI	SI	SI	-	-	-	No recibí		-	

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO CUESTIONARIO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO CUESTIONARIO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)
UJFORM69752013 INEUFORM195612 PH-EC-misionero	30/12/2013 19/05/2014	UJFORM69752013 07/02/2013	1/02/2014	Personal	NEUFORM195612 06/03/14 Oficio al vocal	12/05/2014	Personal							9/03/2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibido	-	1) Manifiesta que la firma que aparece en el recibo modificado no es la de él; 4) Manifiesta que no ha presentado ninguna acción penal; 5) Manifiesta que no ha participado en ninguna campaña política ni ha recibido sueldo alguno por apoyo económico.
UJFORM69752013		UJFORM69752013 07/02/2013												07/02/2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibido	-	Niega los hechos por ser falsos, no confirma ni ratifica el acuse de recibo; niega que haya recibido la cantidad de \$4.000,00 y señala que no recibió el dinero y por lo tanto niega la firma que aparece en el recibo, se reserva derecho de ejercer acción legal que proceda
UJFORM69752013		UJFORM69752013 07/02/2013	28/01/2014	Por un tercero										1/02/2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibido	-	Niega haber recibido cualquier tipo de apoyo, y la firma que aparece no es la que utiliza

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)
UJORN0972013 UJORN0972013	30/12/2013	UJORN0972013	31/07/2014	Personal										10/02/2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	Niega haber recibido cualquier tipo de apoyo, y la firma que aparece fue falsificada
UJORN0972013 UJORN0972013	30/12/2013	UJORN0972013	07/02/2014	Personal	NEUJORN19612 06/01/14 Oficial vocal	10/09/2014	Personal							04/03/2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	(1) Manifiesta que no reconoce la firma en el medio mostrado, 4) Manifiesta que no ha ejercido ninguna acción penal. Manifiesta que nunca ha participado en ninguna campaña política.
UJORN0972013 UJORN0972013	30/12/2013	UJORN0972013	07/02/2014	Personal	NEUJORN19612 06/01/14 Oficial vocal	10/09/2014	Personal							04/03/2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	(1) Manifiesta que la firma que aparece en el medio mostrado no es la suya. 4) Manifiesta que no ha ejercido ninguna acción penal. 5) Manifiesta que no participó en ninguna campaña política a favor de ningún partido político, y que nunca ha recibido ni firmado por apoyo económico.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO VOCAL (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (40)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (41)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (42)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORN69752013 NEUFORN19562 P14. Cuestionario	30/12/2013 19/05/2014	UFORN 22/02/2013	07/02/2014	Personal	NEUFORN19562 06/2014 Oficial vocal	10/09/2014	Personal							04/03/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	1) Manifesta que no reconoce la firma en el recibo notificado. 4) Manifesta que no ha agotado ninguna acción penal. 5) Manifesta que nunca ha participado en ninguna campaña política alguna a favor del Partido Movimiento Progresista, ni ha recibido ningún apoyo económico.
UFORN69752013 NEUFORN19562 P14. Cuestionario	30/12/2013 19/05/2014	UFORN 22/02/2013	07/02/2014	Personal	NEUFORN19562 06/2014 Oficial vocal	10/09/2014	Personal							04/03/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	1) Manifesta que no ha firmado ningún recibo por apoyo económico ni se su firma la que aparece en el recibo. 4) Manifesta que no ha presentado ninguna acción penal. 5) Manifesta que nunca ha participado en ninguna campaña política con el partido Movimiento Progresista.
UFORN69752013 NEUFORN19562 P14. Cuestionario	30/12/2013 19/05/2014	UFORN 22/02/2013	07/02/2014	Personal	NEUFORN19562 06/2014 Oficial vocal	10/09/2014	Personal							04/03/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	1) Manifesta que no reconoce la firma ni haber firmado recibo alguno por pago. 4) Manifesta que no ha presentado ninguna acción penal. 5) Manifesta que no ha participado en ninguna campaña política de ningún partido.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (29)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE QUE RECIBO (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)
U.FORN/697/2013 INEU.FORN/1956/2014 P14. Cuadrante	30/12/2013 19/05/2014	U.FORN/697/2013 25/02/2013	07/02/2014	Personal	NEU.FORN/1956/2014 06/03/14 Oficial vocal	10/05/2014	Personal							04/03/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	(1) No reconoce su firma ni haber firmado recibo alguno; 4) Manifesta no haber ejecutado ninguna acción penal; 5) Manifesta haber participado en la campaña electoral local del partido Movimiento Progresista pero no recibió ningún apoyo económico o pago alguno por sus servicios.
U.FORN/697/2013 INEU.FORN/1956/2014 P14. Cuadrante	30/12/2013 19/05/2014	U.FORN/697/2013 25/02/2013	07/02/2014	Personal	NEU.FORN/1956/2014 06/03/14 Oficial vocal	11/05/2014	Personal							04/03/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	(1) Manifesta que no recibió ningún pago ni firma ningún recibo por apoyo económico alguno; 4) Manifesta que no ha presentado ninguna acción penal; 5) Manifesta que no ha participado en ninguna campaña política a favor de ningún partido.
U.FORN/697/2013	30/12/2013	U.FORN/697/2013 25/02/2013	1/02/2014	Por un tercero										20/02/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	Indica que en ningún momento ha realizado campaña electoral de los partidos políticos en cuestión, por lo que no tienen porqué pagarme cuando no he hecho ninguna actividad electoral; adicio que me han solicitado la firma para verificar un pago que yo no he cobrado

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (40)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (41)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (42)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORN6972013	30/12/2013	UFORN6972013	07/02/2014	Personal										20/02/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	Aclarar que se me acusa de haber recibido una cantidad por un trabajo que no hice, ni he recibido ningún dinero, por campaña electoral, ya que no tengo tiempo disponible para hacerlo, tampoco es correcto que haya recibido dinero ni firma
UFORN6972013	30/12/2013	UFORN6972013	07/02/2014	Personal										20/02/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	Si falso y de manera incorrecta ya que en ningún momento he recibido dicha cantidad. Por otra parte solicito que verifiquen mi firma, ya que no coincide con la de mi credencial de elector
UFORN6972013 INEUFORN19562 914 Questionario	30/12/2013 19/05/2014	UFORN6972013	07/02/2014	Personal	INEUFORN19562 60/2014 Oficial vocal	10/09/2014	Personal							04/03/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	1) Manifesta que el recibo mostrado nunca lo había visto y que la firma no es la suya. 4) Manifesta que no ha presentado ninguna acción penal. 5) Manifesta que no participó en ninguna campaña política del partido Movimiento Progresista.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS															RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	14r OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIALES ONOMAS (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIALES ONOMAS (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE QUE RECIBO (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORN6972013 NEUFORN1962 P14. Cuestionario	30/12/2013 19/05/2014	UFORN6972013 20/02/2013	07/02/2014	Personal	NEUFORN1962 06/01/14 Oficial vocal	11/09/2014	Personal							04/03/2014	SI	SI	-	-	-	-	SI	No recibí	Ha participado en apoyo a la campaña de Diputado Local y Gobernador, pero que no ha recibido pago o apoyo económico alguno.	1) Manifesta que nunca ha firmado ningún recibo por apoyo económico por lo tanto la firma no es suya. 4) Manifesta que no ha presentado ninguna acción penal. 5) Manifesta que ha participado en apoyo a la campaña de Diputado Local y Gobernador, pero que no ha recibido pago o apoyo económico alguno.	1) Manifesta que nunca ha firmado ningún recibo por apoyo económico por lo tanto la firma no es suya. 4) Manifesta que no ha presentado ninguna acción penal. 5) Manifesta que ha participado en apoyo a la campaña de Diputado Local y Gobernador, pero que no ha recibido pago o apoyo económico alguno.
UFORN6972013 NEUFORN1962 P14. Cuestionario	30/12/2013 19/05/2014	UFORN6972013 20/02/2013	11/02/2014	Personal										24/02/2014	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	En ningún momento he recibido ningún tipo de apoyo material por concepto de reconocimiento por actividades políticas de campaña federal por la Coalición	En ningún momento he recibido ningún tipo de apoyo material por concepto de reconocimiento por actividades políticas de campaña federal por la Coalición	
UFORN6972013 NEUFORN1962 P14. Cuestionario	30/12/2013 19/05/2014	UFORN6972013 20/02/2013	07/02/2014	Personal	NEUFORN1962 06/01/14 Oficial vocal	10/09/2014	Personal							04/03/2014	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	1) El ciudadano manifiesta no reconocer su firma y no reconoce el recibo. 4) Manifesta no haber recibido recurso alguno de ninguna índole y no haber ejercido acción penal alguna. 5) Ninguna.	1) El ciudadano manifiesta no reconocer su firma y no reconoce el recibo. 4) Manifesta no haber recibido recurso alguno de ninguna índole y no haber ejercido acción penal alguna. 5) Ninguna.	

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS								
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (40)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)
UFORN6972013	30/12/2013	UFORN6972013	07/02/2014	Personal								23/02/2014		SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	Aclarar que se me acusa de haber recibido una cantidad por un trabajo que no hice, ni he recibido ningún dinero, por campaña electoral, ya que no tengo tiempo disponible para hacerlo, tampoco me contesto que sea así, tampoco

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (30)	FECHA NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	RECONOCE FIRMAS DE RECIBO (36)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (37)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (38)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMAS DE RECIBO (40)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (41)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (42)	RESPUESTA (43)	OBSERVACIONES (44)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UJFORN6972013 INEJFORN19562 P14 Questionario	30/12/2013 19/05/2014	UJFORN6972013 INEJFORN19562 P14 Questionario	10/02/2014	Por un tercero	NEJFORN19562 Oficio al vocal	13/09/2014	Personal								S	S	S	S	-	-	-	No recibí	-	1) Manifiesta que nunca ha firmado ningún recibo y que la firma que aparece en el recibo no es la suya. 4) Manifiesta que no ha presentado ninguna acción penal. 5) Manifiesta que nunca recibió ningún pago ni apoyo económico del partido Movimiento Progresista.
UJFORN6972013 INEJFORN19562 P14 Questionario	30/12/2013 19/05/2014	UJFORN6972013 INEJFORN19562 P14 Questionario	09/02/2014	Por un tercero	NEJFORN19562 Oficio al vocal	10/09/2014	Personal								S	S	S	S	-	-	-	No recibí	-	1) Manifiesta que nunca ha firmado dicho recibo por esa cantidad y sostiene que la firma de dicho recibo no coincide con la de mi credencial sea elector. 4) No he ejercido ninguna acción penal al respecto. 5) En ningún momento se me hizo firmar dicho recibo por esa cantidad dejando claro que no recibí ningún pago por dicha cantidad y que la
UJFORN6972013 INEJFORN19562 P14 Questionario	30/12/2013 19/05/2014	UJFORN6972013 INEJFORN19562 P14 Questionario	10/02/2014	Por un tercero	NEJFORN19562 Oficio al vocal	12/09/2014	Personal								S	S	S	-	-	-	S	No recibí	-	1) Manifiesta que la firma que aparece en el recibo modificado no es la suya. 4) Manifiesta que no ha presentado ninguna acción legal. 5) Manifiesta que si participó en la campaña federal y la campaña para Gobernador del Estado pero nunca recibió pago ni firmó ningún recibo.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	ESPECIFICACIONES ONARIO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er ESPECIFICACIONES ONARIO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DESCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DESCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DESCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE QUI RECIBO (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)
UFORN69752013 NEUFORN19562 P14 Cuestionario	30/12/2013 19/05/2014	UFORN69752013 09/02/2014	Personal	NEUFORN19562 09/02/14 Oficial vocal	10/09/2014	Personal							04/03/2014	SI	SI	SI		-	-	-	No recibí	-	1) No reconoce la cantidad solicitada en el rubro de reconocimiento por actividades porque no se le entregó ni se le entregó el dinero; 4) No ha ejercido acciones penales; 5) Manifiesta al ciudadano que no se vea que haya falsificado una firma cuando no recibió ningún recurso económico.
UFORN69752013 NEUFORN19562 P14 Cuestionario	30/12/2013 19/05/2014	UFORN69752013 09/02/2014	Personal	NEUFORN19562 09/02/14 Oficial vocal	10/09/2014	Personal							04/03/2014	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	-	1) No confirma que se le entregó la cantidad que aparece en el rubro de reconocimiento por actividades. 4) No ha ejercido acciones penales; 5) Manifiesta al ciudadano que no se debe utilizar su nombre ni su firma cuando no reconoce que haya firmado personalmente, sino que fue una falsificación.
UFORN69752013 NEUFORN19562 P14 Cuestionario	30/12/2013 19/05/2014	UFORN69752013 30/01/2014	Personal	NEUFORN19562 09/02/14 Oficial vocal	11/09/2014	Personal							04/03/2014	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	-	1) No reconoce la cantidad solicitada en el rubro de reconocimiento por actividades; 4) No ha ejercido acciones penales al respecto; 5) Manifiesta al ciudadano que le causa molestia por la dilación prevista ocasionada cuando no firmó este documento cuando recibió y entregó indicando la firma que aparece en el

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS								
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGEN SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (32)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE RESPUESTA (34)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORN6972013 INEUFORN19502 B14 Questionario	30/12/2013 19/05/2014	UFORN6972013 05/02/2013	25/01/2014	Personal								04/02/2014	SI	SI	-	-	-	-	No recibí ningún pago de reconocimiento, por lo tanto no firmé nada	-		No recibí ningún pago de reconocimiento, por lo tanto no firmé nada
UFORN6972013 INEUFORN19502 B14 Questionario	30/12/2013 19/05/2014	UFORN6972013 05/02/2013	24/01/2014	Personal	NEUFORN19502014 05/02/14 Oficial vocal	10/05/2014	Personal					04/02/2014	SI	SI	-	-	-	-	SI	No recibí	Por sus actividades políticas en campaña federal, 4) No he ejercido acción penal por violación de mi tema 3) Adoro que por mis actividades políticas en campaña federal, no recibí pago alguno.	

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGEN SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO OCURRE ONARIO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO OCURRE ONARIO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE QUE RECIBO (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORN067/2013 NEUFORN/15/02 514 Cuernavaca	02/12/2013 19/05/2014	UFORN 701/2013	17/01/2014	Personal	NEUFORN/15/02/2014 06/2014 Oficio al vocal	03/05/2014	Personal							SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibido	-	1) No he recibido "ningún" tipo de respuesta, desconozco esta noticia y no he recibido nada de la parte, d) No he recibido nada porque desconozco esto y no le he dado importancia porque no he recibido nada de dinero / no tengo ningún cargo en política, S que se investigue este hecho porque no recibí nada y qué se haga conocimiento de la persona que hizo esto y se vea de que mi firma es sobre y está mal y se aprueba de esto, quiero saber qué persona de la que se desconoce la firma	1) No he recibido "ningún" tipo de respuesta, desconozco esta noticia y no he recibido nada de la parte, d) No he recibido nada porque desconozco esto y no le he dado importancia porque no he recibido nada de dinero / no tengo ningún cargo en política, S que se investigue este hecho porque no recibí nada y qué se haga conocimiento de la persona que hizo esto y se vea de que mi firma es sobre y está mal y se aprueba de esto, quiero saber qué persona de la que se desconoce la firma
UFORN067/2013 NEUFORN/15/02 514 Cuernavaca	02/12/2013 19/05/2014	UFORN 702/2013	17/01/2014	Personal	NEUFORN/15/02/2014 06/2014 Oficio al vocal	03/05/2014	Personal							SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibido	-	1) No he recibido "ningún" tipo de respuesta, desconozco esta noticia y no he recibido nada de la parte, d) No he recibido nada porque desconozco esto y no le he dado importancia porque no he recibido nada de dinero / no tengo ningún cargo en política, S que se investigue este hecho porque no recibí nada y qué se haga conocimiento de la persona que hizo esto y se vea de que mi firma es sobre y está mal y se aprueba de esto, quiero saber qué persona de la que se desconoce la firma	1) No he recibido "ningún" tipo de respuesta, desconozco esta noticia y no he recibido nada de la parte, d) No he recibido nada porque desconozco esto y no le he dado importancia porque no he recibido nada de dinero / no tengo ningún cargo en política, S que se investigue este hecho porque no recibí nada y qué se haga conocimiento de la persona que hizo esto y se vea de que mi firma es sobre y está mal y se aprueba de esto, quiero saber qué persona de la que se desconoce la firma

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS															RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE QUE RECIBO (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
U.FORN/697/2013 U.FORN/118/2014 114. Cuadrante	32/12/2013	U.FORN/697/2013 U.FORN/118/2014	29/01/2014	Personal	U.FORN/118/2014 Oficio al vocal	08/03/2014	Personal							04/03/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	-	(1) No confirmo el origen del asue, 3) No recibí dicho pago, 4) No se ha agendado acción penal, 5) Nunca recibí el dinero y no es su firma.
U.FORN/697/2013	32/12/2013	U.FORN/697/2013 7652013	29/01/2014	Personal										1/20/2014	SI	SI	-	-	-	-	-	-	No recibí	-	Que en ningún momento firmé recibiendo algo y que es negativo el haber recibido la cantidad de \$3.408.00 por parte de la Coalición Movimiento Programada en el año 2012, de lo que concierne que mi firma fue solicitada.
U.FORN/697/2013	32/12/2013	U.FORN/697/2013 7652013	07/02/2014	Personal										1/20/2014	SI	SI	-	-	-	-	-	-	No recibí	-	Que en ningún momento firmé recibiendo algo y que es negativo el haber recibido la cantidad de \$3.408.00 por parte de la Coalición Movimiento Programada en el año 2012, de lo que concierne que mi firma fue solicitada.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS															RESPUESTA DE CIUDADANOS								
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (30)	FECHA NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)
U.FORN/697/2013 VOCAL 19/05/2014 114. Cuadrante	30/12/2013	U.FORN/697/2013 08/02/2014	31/07/2014	Por un tercero	NE INFORME 30/02/14 Oficial vocal	10/09/2014	Personal							9/4/09/2014	SI	SI	SI	-		-	No recibí	-	(1) No reconozco su firma en el documento, ignora quien materializó su firma. 4) No ha ejercido alguna acción, se reserva ese derecho. 5) La caducidad manifestó su modesta por el mal uso de sus datos personales, solicitando al INE una investigación y sanción a los responsables.
U.FORN/697/2013	30/12/2013	U.FORN/697/2013 07/02/2013	29/07/2014	Personal										12/03/2014	SI	SI	-	-		-	No recibí	-	Se infiere que no recibió los recursos reconocidos y por lo tanto no reconozco la firma en dicho documento, presumiendo un mal uso de mis datos personales y la falsificación de mi firma por lo que me dedino de cualquier responsabilidad legal y administrativa que proceda.
U.FORN/697/2013	30/12/2013	U.FORN/697/2013 07/02/2013	29/07/2014	Personal										12/03/2014	SI	SI	-	-		-	No recibí	-	Se infiere que no recibió los recursos reconocidos y por lo tanto no reconozco la firma en dicho documento, presumiendo un mal uso de mis datos personales y la falsificación de mi firma por lo que me dedino de cualquier responsabilidad legal y administrativa que proceda.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS												
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE QUE RECIBO (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)		
																									entidad afiliada en el oficio que sirve como comprobación de gastos en campañas de los Partidos Políticos y mucho menos por la Ciudadanía Movimiento Progresista. Mucho menos ser ni firma la que aparece en dicho escrito para tampoco he trabajado en ninguna Campaña Política como promotor de	
UFORN096752013	32/02/2013	UFORN 7742013	31/07/2014	Personal										1/20/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	-		
UFORN096752013	32/02/2013	UFORN 7742013	29/07/2014	Personal	NE UFORN 6972013	09/09/2014	Personal							04/03/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	-		1) No reconoce el modo; 4) No ha ejercido ningún acción penal en contra del partido; 5) No reconoce haber recibido dinero, ni es su firma, solamente en el formato.
UFORN096752013	32/02/2013	UFORN 7742013	14/02/2014	Personal										1/20/2014	SI	SI	-	-	-	-	-	SI	No recibí			No he recibido ningún reconocimiento de ninguna clase y de ningún Partido Político a como se sugiere en su escrito, lo que si quiero comentar es que participé en las elecciones 2012 cuando la casilla en apoyo al Partido Ciudadano.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS												
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGEN SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE QUI RECIBO (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)		
UFORM6972013 INEUFORM19502 P14. Cuestionario	32/12/2013	UFORM6972013 07/02/2013	17/01/2014	Personal										12/03/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	-	Solo reafirmar que el recibo del reconocimiento de la Coalición del Movimiento Progresista al estar a mi nombre y los datos son correctos para la firma no es la mía, ni he recibido ningún dinero ni participado en sus actividades políticas. No recibí ningún pago a través de un cheque o efectivo o por tarjeta de crédito.	46)
UFORM6972013 INEUFORM19502 P14. Cuestionario	32/12/2013	UFORM6972013 07/02/2013	17/01/2014	Personal	NEUFORM19502 06/02/14 Oficial vocal	03/09/2014	Personal							04/03/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	-	Recibo ningún dinero además del que me dio la IE. 4) No he gastado nada de la IE. 5) Queda pendiente porque no me han dado el dinero. 6) No va a presentar copia de nada porque yo no tengo nada que ver con estas cosas, ya hablan de eso.	
UFORM6972013 INEUFORM19502 P14. Cuestionario	32/12/2013	UFORM6972013 07/02/2013	17/01/2014	Personal	NEUFORM19502 06/02/14 Oficial vocal	03/09/2014	Personal							04/03/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	-	Solo he recibido el dinero que me dio ese papá. 4) No he gastado nada de la IE. 5) Queda pendiente porque no me han dado el dinero. 6) No va a presentar copia de nada porque yo no tengo nada que ver con estas cosas, ya hablan de eso.	
UFORM6972013 INEUFORM19502 P14. Cuestionario	32/12/2013	UFORM6972013 07/02/2013	17/01/2014	Personal	NEUFORM19502 06/02/14 Oficial vocal	03/09/2014	Personal							04/03/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	-	Solo he recibido el dinero que me dio ese papá. 4) No he gastado nada de la IE. 5) Queda pendiente porque no me han dado el dinero. 6) No va a presentar copia de nada porque yo no tengo nada que ver con estas cosas, ya hablan de eso.	

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	DISCONOCE FIRMAS DE RECIBO (36)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (37)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMAS DE RECIBO (40)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (41)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (42)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
U.FORN/697/2013	30/12/2013	U.FORN/697/2013	29/12/2013	Personal								20/03/2014			SI		SI	-	-	-	-	No recibí	-	Se informo que no recibí los recursos mencionados y por lo tanto no reconozco la firma en dicho documento, presentando un mal uso de mis datos personales y la falsificación de mi firma por lo que no doy destino de cualquier responsabilidad legal o administrativa que proceda.
U.FORN/697/2013	30/12/2013	U.FORN/697/2013	07/02/2014	Personal								20/03/2014			SI		SI	-	-	-	-	No recibí	-	Se informo que no recibí los recursos mencionados y por lo tanto no reconozco la firma en dicho documento, presentando un mal uso de mis datos personales y la falsificación de mi firma por lo que no doy destino de cualquier responsabilidad legal o administrativa que proceda.
U.FORN/697/2013	30/12/2013	U.FORN/697/2013	29/12/2014	Personal								20/03/2014			SI		SI	-	-	-	-	No recibí	-	Se informo que no recibí los recursos mencionados y por lo tanto no reconozco la firma en dicho documento, presentando un mal uso de mis datos personales y la falsificación de mi firma por lo que no doy destino de cualquier responsabilidad legal o administrativa que proceda.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS															RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN OMARDO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN OMARDO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE QUE RECIBO (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORN69752013	32/12/2013	UFORN69752013	14/02/2014	Personal										2/03/2014	SI	SI	-	-	-	-	-	-	No recibí	-	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no es cierto, ya que no tiene apoyo administrativo de que la firma no es la que utilizo en mis documentos públicos y privados, y para cualquier fin legal.
UFORN69752013	32/12/2013	UFORN69752013	23/01/2014	Personal										10/02/2014	SI	SI	SI	-	-	-	-	-	No recibí	-	No he recibido ningún dinero de parte del PRD la forma que me hicieron llegar mis datos administrativos, pero esa no es mi firma y tampoco mi firma, ya que ese documento fue falsificado por alguien que usó mis datos y mi firma.
UFORN69752013	32/12/2013	UFORN69752013	3/01/2014	Personal										2/03/2014	SI	SI	-	-	-	-	-	-	No recibí	-	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no es cierto, ya que no tiene apoyo administrativo de que la firma no es la que utilizo en mis documentos públicos y privados, y para cualquier fin legal.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS															RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO/OCUEST ONARIO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO/OCUEST ONARIO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE QUE RECIBO (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UJFORN6972013 INEUFORN19562 P14. Cuestionario	30/12/2013 19/05/2014	UJFORN6972013 30/12/2013	Personal	INEUFORN19562 30/12/14 Oficial vocal	04/09/2014	Personal							04/09/2014	SI	SI	SI	-	\$800.00	-	-	SI	No recibí	Sólo recibí \$200.00 por cubrir la cuota, y una vez solo recibí \$400.00 más eso y nada más soleres y nada más.	1) No recibí nada no es mi firma en ese papel. 4) Si lo devolví a la Ciudad de México. 5) Claro que se entregó en manos de quien se entregó al dinero, sólo recibí \$200.00 por cubrir la cuota, y una vez solo recibí \$400.00 más eso y nada más soleres y nada más.
UJFORN6972013 INEUFORN19562 P14. Cuestionario	30/12/2013 19/05/2014	UJFORN6972013 30/12/2013	Por un tercero	INEUFORN19562 30/12/14 Oficial vocal	08/09/2014	Personal							04/09/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí		1) El ciudadano en cuestión manifiesta no haber recibido dinero alguno, ni firmado recibos pro el mismo concepto. 4) Solares no haber entregado ninguna acción para el respecto. 5) Manifiesta estar totalmente ajeno a los hechos que se le imputan y manifiesta no haber recibido dinero ni para un préstamo.	
UJFORN6972013 INEUFORN19562 P14. Cuestionario	30/12/2013 19/05/2014	UJFORN6972013 30/12/2013	Personal	INEUFORN19562 30/12/14 Oficial vocal	03/09/2014	Personal							04/09/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí		1) Negativo, yo nunca trabajé para ningún partido político no es mi firma. 4) Mandé un escrito antes como respuesta a lo que ya me habían preguntado. 5) La verdad no es mi firma laboron de hacer una demanda pero no es, pido que se investigue porque yo no recibí el dinero y tampoco trabajé para partidos políticos.	

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UJFORN6972013 NEUJFORN18562 114. Cuadrante	30/12/2013 19/05/2014	UJFORN 30/02/2013	17/07/2014	Por un tercero	NEUJFORN18 30/08/14 Oficial vocal	03/09/2014	Personal					04/03/2014		SI	SI	SI	-	-	-	No recibí.		-	Me recibí un correo electrónico el día 04/03/2014, en el cual me avisaron que me había sido asignado el caso, pero que no había más novedades al respecto, porque es un asunto que compete a los ciudadanos. 5) Que se investigue a fondo que personas tienen este derecho de recursos porque no pienso que sea solo a mí, sino a todos los que me lo han asignado que ellos.
UJFORN6972013 NEUJFORN18562 114. Cuadrante	30/12/2013 19/05/2014	UJFORN 30/02/2013	31/07/2014	Personal	NEUJFORN18 30/08/14 Oficial vocal	10/09/2014	Personal					04/03/2014		SI	SI	SI	-	-	-	No recibí.		-	1) No conozco al rector, ni la firma que contiene. 4) No he elegido acción penal. 5) Nunca recibí la cantidad señalada en el recibo.
UJFORN6972013	30/12/2013	UJFORN 30/02/2013	21/07/2014	Personal									20/03/2014		SI	SI	-	-	SI	No recibí.		-	Recibí que al trabajar y algo de trabajo como líder del partido, pero no he recibido ningún reconocimiento de la cantidad que me marca el recibo, por lo tanto, la digo que me nombre es correcto y me reconocen también, pero me han quitado mi firma, me desistí de la misma porque no me danon nada.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)
UJFORN69752013 NEUJFORN18562 19/05/2014 314 Cuadrante	20/12/2013	UJFORN69752013 VOCAL 30/05/2013	17/01/2014	Personal	NEUJFORN18562 30/05/14 Oficial vocal	03/06/2014	Personal							04/02/2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	1) No lo reconozco, esa no es mi firma, 4) rec 5) No es mi firma y no recibí el dinero y que además nunca he trabajado para la policía, que se investigue quién cobró y quién firmó por mí porque yo no recibí nada.
UJFORN69752013		UJFORN69752013 30/12/2013		Por un tercero										04/02/2014	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	-	
UJFORN69752013	20/12/2013	UJFORN69752013 30/12/2013	3/01/2014	Personal										2/03/2014	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	-	Se informó que no recibí los recursos reconocidos y por lo tanto no reconozco la firma en dicho documento, presentando un mal uso de mis datos personales y la falsificación de mi firma por lo que me dedino de cualquier responsabilidad legal y administrativa que proceda.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGEN SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (29)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORN09672013 INEUFORN18562 P14. Questionario	02/12/2013	UFORN09672013 01/12/2013	23/01/2014	Por un tercero										04/02/2014	SI	SI	-	-	-	-	-	No recibí	-	La ciudadanía en cuestión manifiesta no reconocer el recibo que se le muestra, ni haber recibido dinero por parte del concejo, así mismo no reconoce la firma señalada en el recibo; pide que se le dé oficio a la Jefe de Tránsito, para que nombre un perito en grafoscopia
UFORN09672013 INEUFORN18562 P14. Questionario	02/12/2013	UFORN09672013 01/12/2013	23/01/2014	Personal	NEUFORN18562 06/03/14 Oficio al vocal	11/09/2014	Personal							04/02/2014	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	-	1) La ciudadanía en cuestión manifiesta no reconocer el recibo que se le muestra, ni haber recibido dinero por parte del concejo, así mismo no reconoce la firma señalada en el recibo; 4) Señala que hasta la presente fecha no ha realizado ninguna acción penal con el caso en cuestión; 5) No tiene comentarios al respecto.
UFORN09672013 INEUFORN18562 P14. Questionario	02/12/2013	UFORN09672013 01/12/2013	23/01/2014	Por un tercero	NEUFORN18562 06/03/14 Oficio al vocal	10/09/2014	Personal							04/02/2014	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	-	1) Desconoce el recibo y no recibe dinero alguno; 4) No ha ejecutado acción penal en contra de ningún partido político; 5) La firma que aparece en el recibo no es la misma, desconoce completamente del recibo que se le muestra.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGEN SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORN6972013 INEUFORN18562 P14. Quesonero	32/12/2013 09/05/2014	UFORN6972013 31/02/2013	1/20/2014	Personal	INEUFORN18562 05/2014 Oficial vocal	10/05/2014	Personal							04/03/2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibido	-	1) No recibí el recurso solicitado en el mes de reconocimiento por actividades políticas en campaña electoral. 4) No por no estar extendido. 5) En ningún momento he recibido esta cantidad, toda vez que la firma manuscrita en el recibo no es la mía.	
UFORN6972013 INEUFORN003302 P14																								Manifiesto que no es mi firma, que desconozco el documento, desconozco la firma que se me muestra, y que bajo protesta de decir verdad, que toda vez que cuando me reconozco para realizar un trámite no cuento con un graboscopio y una cámara, con fundamento en el artículo 18 Constitucional a Unidad gremial de la Procuraduría General de la República, Delegación Toluca, para evidenciar que esa firma en el recibo no es la mía, por lo que desconozco el documento y la firma manuscrita en dicho documento.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS															RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO SOLICITUD OFICIO VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD OFICIO VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD OFICIO VOCAL (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD OFICIO VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE QUI RECIÓ (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORM6972013	32/12/2013	UFORM6972013	28/01/2014	Por un tercero										2/03/2014	SI	SI	-	-	-	-	-	-	No recibí	-	Los hechos son totalmente falsos. Ni confiero ni ratifico porque dicho documento jamás me fue puesto a la vista, mucho menos fue firmado por el suscribido, por lo que niego la firma que se encuentra estampada.
		UFORM6972013	17/01/2014	Personal										28/01/2014	SI	SI	SI	-	-	-	-	-	No recibí	-	
UFORM6972013	32/12/2013	UFORM6972013	28/01/2014	Por un tercero										2/03/2014	SI	SI	-	-	-	-	-	-	No recibí	-	La información que no está en los archivos relacionados y por lo tanto no reconozco la firma en dicho documento, presentando un mal uso de mis datos personales y la falsificación de mi firma por lo que no doy destino de cualquier responsabilidad legal administrativa que proceda.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	1er OFICIO SOLICITUD VOCAL (25)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (26)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (27)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (28)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (29)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (30)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (31)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (40)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (41)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (42)	RESPUESTA (43)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
U.FORN/697/2013 INE/UFORN/1956/2 114 Cuestionario	30/12/2013 19/05/2014	U.FORN/697/2013 32/2/2013	29/01/2014	Por un tercero	NEUFORN/1956/2 30/01/14 Oficial vocal	14/05/2014	Personal						04/03/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	No recibido	-	1) Desconozco el recibo y no es mi firma. 4) No ha ejercido acción penal en contra de ningún partido político. 2) Actualmente que no es mi firma la firmada en el recibo, el cual también desconozco.
U.FORN/697/2013		U.FORN/697/2013 32/2/2013	29/01/2014	Personal									20/03/2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibido	-	La infono que no recibí los recursos reconocidos y por lo tanto no reconozco la firma en dicho documento, presentando un mal uso de mis datos personales y la falsificación de mi firma por lo que no deseo de cualquier responsabilidad legal o administrativa que proceda.	
U.FORN/697/2013		U.FORN/697/2013 32/2/2013	07/02/2014	Personal									20/03/2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibido	-	La infono que no recibí los recursos reconocidos y por lo tanto no reconozco la firma en dicho documento, presentando un mal uso de mis datos personales y la falsificación de mi firma por lo que no deseo de cualquier responsabilidad legal o administrativa que proceda.	

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORN98202013 INEUFORN1982 P14 Questionario	30/12/2013 19/05/2014	UFORN98202013 INEUFORN1982 P14 Questionario	29/07/2014	Personal	INEUFORN1982 06/08/14 Oficial vocal	09/09/2014	Personal							04/03/2014	SI	SI	SI	-		-	-	No recibí	-	1) No es cierto que recibí dinero; 4) No he efectuado ninguna acción para; 5) No me ha dado respuesta de dinero que se menciona en el recibo.
UFORN98202013 INEUFORN1982 P14 Questionario	30/12/2013 19/05/2014	UFORN98202013 INEUFORN1982 P14 Questionario	31/07/2014	Personal										20/03/2014	SI	SI	SI	-		-	-	No recibí	-	Se me entregó el dinero en el día que sirve como comprobación de gastos en campañas de los Partidos Políticos y mucho menos por la Fundación Movimiento Progresista, mucho menos se me firma la que aparece en dicho escrito para después he trabajado en ninguna Campaña Política como promotor de
UFORN98202013 INEUFORN1982 P14 Questionario	30/12/2013 19/05/2014	UFORN98202013 INEUFORN1982 P14 Questionario	09/07/2014	Personal	INEUFORN1982 06/08/14 Oficial vocal	22/05/2014	Personal							04/03/2014	SI	SI	SI	-		-	-	No recibí	-	1) Que el recibo que se le envió no se reconoce ya que no es su firma y no recibí dinero; 4) Que no he realizado ninguna acción al respecto pues espera que se solucione con el escrito que está presente; 5) Que no es justo que están falsificando su firma cuando no le dieron ese dinero.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS															RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DESCONOCER FIRMA DE RECIBO (37)	DESCONOCER CONTENIDO DE RECIBO (38)	DESCONOCER LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCER RECIBO (40)	RECONOCER FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCER CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCER LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)
UFFORN96202013 INEUFFORN18562 014 Cuadrante	03/12/2013 19/05/2014	UFFORN96202013 04/02/2013	09/02/2014	Personal	NEUFFORN96202013 06/02/14 Oficio al vocal	22/05/2014	Personal							04/09/2014	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibido	-	1) Que no reconoce el recibo que se le exhibe y que no recibió ninguna cantidad de dinero; 4) Que no ha realizado nada; 5) Que espera que con esto se termine el asunto.
UFFORN96202013 INEUFFORN18562 014 Cuadrante	03/12/2013 19/05/2014	UFFORN96202013 04/02/2013	10/02/2014	Personal	NEUFFORN96202013 06/02/14 Oficio al vocal	11/05/2014	Personal							04/09/2014	SI	SI	-	-	\$400.00	-	-	SI	No recibido	Recibido \$400.00 por haber sido representante de la calle el día de la elección y que se proporcionó un individuo de nombre Felipe Miranda Velázquez al que desconoce su domicilio; 4) No ha esperado acciones penales respecto a este asunto; 5) Las actuaciones fueron en coordinación con el que no recibió el importe indicado en el recibo antes mencionado y que tampoco la firma que aparece en el recibo.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGEN SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (40)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (41)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (42)	RESPUESTA (43)	OBSERVACIONES (44)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORN/962/2013 NEUFORN/196/2 D14 Cuadriano	30/12/2013 10/05/2014	UFORN/962/2013 30/12/2013	19/02/2014	Por un tercero	NEUFORN/196/2014 06/02/14 Oficio al vocal	11/05/2014	Personal							04/02/2014	SI	SI	-	-	-	SI	No recibí	Recibí \$400.00 por haber sido representante de la persona que se los entregó en el día de la elección	Recibí \$400.00 por haber sido representante de la persona que se los entregó en el día de la elección	Recibí \$400.00 por haber sido representante de la persona que se los entregó en el día de la elección
UFORN/962/2013 NEUFORN/196/2 D14 Cuadriano	30/12/2013 10/05/2014	UFORN/962/2013 30/12/2013	17/02/2014	Personal	NEUFORN/196/2014 06/02/14 Oficio al vocal	11/05/2014	Personal							04/02/2014	SI	SI	-	-	-	SI	No recibí	Recibí \$400.00 por haber sido representante de la persona que se los entregó en el día de la elección	Recibí \$400.00 por haber sido representante de la persona que se los entregó en el día de la elección	Recibí \$400.00 por haber sido representante de la persona que se los entregó en el día de la elección

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMAS RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMAS RECIBO (40)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (41)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (42)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORM/96202013 NEUFORN/196/2014 314. Cuestionario	30/12/2013 18/02/2014	UFORM/96202013 NEUFORN/196/2013 314. Cuestionario	13/02/2014	Personal	NEUFORN/196/2014 Oficio al vocal	11/02/2014	Personal							04/03/2014	SI	SI	-	\$400.00	-	-	SI	No recibí	Recibí \$400.00 por haber sido representante de la lista al día de la elección y que me proporcionó un boleto de \$400.00. No he ejercido acciones penales respecto a este asunto. Las declaraciones fueron en reticencia y que no recibí el importe indicado.	1) No recibí el boleto de \$400.00. 2) No recibí el boleto de \$400.00. 3) No recibí el boleto de \$400.00. 4) No recibí el boleto de \$400.00. 5) No recibí el boleto de \$400.00.
UFORM/96202013 NEUFORN/196/2014 314. Cuestionario	30/12/2013 18/02/2014	UFORM/96202013 NEUFORN/196/2013 314. Cuestionario	05/02/2014	Por un tercero	NEUFORN/196/2014 Oficio al vocal	05/02/2014	Personal							04/03/2014	SI	SI	-	-	-	-	SI	No recibí	1) Desconozco el recibo que se me presentó. 2) Representante General de la lista. 3) No recibí la cantidad de dinero en el recibo. 4) No recibí el recibo no correspondiente a la lista.	1) Desconozco el recibo que se me presentó. 2) Representante General de la lista. 3) No recibí la cantidad de dinero en el recibo. 4) No recibí el recibo no correspondiente a la lista.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO/OCUEST ONARIO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO/OCUEST ONARIO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE RECIBO (40)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (41)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (42)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UJFORN9820213	03/12/2013	UJFORN9842013	23/07/2014	Por un tercero										27/03/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	No recibido	-	No es correcto, no he firmado ningún documento como este recibo que se me presenta, ni mucho menos haber recibido dicha cantidad que igual hace mención de la cantidad de \$4638.00, existe una firma que no corresponde a la que yo he utilizado en mis movimientos y además que se requiere.
UJFORN9820213																								Recebo 3287 ni habiendo firmado; 2. No he recibido haber recibido un dinero consistente en \$400.00 por haber sido representante ante casilla y que yo conozco a la persona que se los entregó en efectivo. 4. No he agredido acciones penales respecto a este asunto; 5. Las actuaciones fueron en redundancia a que no recibí el importe indicado en el recibo antes mencionado y que, aunque la firma que aparece en ella tiene parecido con la suya ella no fue quien firmó el recibo.
UJFORN9820213	03/12/2013	UJFORN98932013	17/02/2014	Personal	NEGFORM1980214 Oficio al vocal	11/05/2014	Personal							04/03/2014	SI	SI	-	-	\$400.00	-	SI	No recibido	Recibí \$400.00 por haber sido representante de la elección	

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS											
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE QUI RECIBO (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORN8202013	03/12/2013	UFORN8202013	17/02/2014	Personal										2/03/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	Informa que estuvo participando en el Instituto Federal Electoral la noche 15 de mayo de 2012 y que en ningún momento recibió ningún apoyo que se menciona en el escrito. No es cierto.	Informa que estuvo participando en el Instituto Federal Electoral la noche 15 de mayo de 2012 y que en ningún momento recibió ningún apoyo que se menciona en el escrito. No es cierto.
UFORN8202013	03/12/2013	UFORN8202013	04/02/2014	Personal										2/03/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	Informa que fue empleado como secretario en la calidad de funcionario en el juzgado de distrito de la alcaldía de México "Mecostar" del sector social y recibió una cantidad de \$200.00 y un diploma de agradecimiento.	Informa que fue empleado como secretario en la calidad de funcionario en el juzgado de distrito de la alcaldía de México "Mecostar" del sector social y recibió una cantidad de \$200.00 y un diploma de agradecimiento.
UFORN8202013	03/12/2013	UFORN8202013	22/01/2014	Personal										2/03/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	No recibí dato alguno que se menciona en el documento.	No recibí dato alguno que se menciona en el documento.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGEN SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (40)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (41)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (42)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)
UFORN/96202013 INEUTER/0267 2014	30/12/2013 31/12/2014	UFORN/96202013 30/12/2013	1/10/2014	Por un tercero	INEUTER/0267 5/7/2014	14/1/2014	Personal							16/02/2015	SI	SI	SI	-	-	-	No recibido	-	Disconozco el recibo que se me presenta, no recibí ninguna cantidad por ninguna actividad realizada al partido, la firma del recibo no corresponde a la mía.
UFORN/96202013	30/12/2013	UFORN/96202013 30/12/2013	04/02/2014	Personal										2/03/2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibido	-	Que pago en su totalidad, haber el recibo REPAY, así como también pago que la firma que se presenta coincide en dicho reconocimiento sea de la sucursal. Lo anterior se desprende en recibo que en ningún momento la sucursal recibió remuneración y/o gratificación económica de ningún tipo, ni en ninguna de sus formas ya sea electivo, diputado, concejal, etc., por parte de partido político alguno o la sucursal en ningún momento.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DESCONOCER FIRMA DE RECIBO (37)	DESCONOCER CONTENIDO DE RECIBO (38)	DESCONOCER LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCER LABORES CON PARTIDO (40)	RECONOCER CONTENIDO DE RECIBO (41)	RECONOCER FIRMA DE RECIBO (42)	RESPUESTA (43)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (48)		
UFORN/862/2013	30/12/2013	UFORN/ 21/01/2014	Personal										20/03/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	No recibí			cuál me han informado y además de cualquier responsabilidad que me adjudican alegando dicho asunto como una veracidad infusa hacia mi persona, ya que soy una persona que ejerce su voto como cualquier ciudadano, trabajo honestamente, no vivo de pata y me cogo casi las veinticuatro horas del día en actividades productivas y se me hace imposible que estén personas que viven de mostrar la	(48)
UFORN/862/2013 NEUFORN/196/2014 D14 Cuadrante	30/12/2013 10/05/2014	UFORN/ 23/01/2014	Personal	NEUFORN/196/2014 Oficio al vocal	15/05/2014	Personal							04/02/2014	SI	SI	-	SI	-	-	No recibí			Recibí \$2,000.00 por su labor como coordinador de campaña del PRD en relación a la elección local y \$2,000.00 por su labor como coordinador de campaña del PRD en relación a la elección local y se lo entregó a Luc Manuel Lugo del que no sabe donde vive. 4) No ha ejercido acciones penales respecto a este asunto. 5) Las aclaraciones fueron	Recibí \$2,000.00 por su labor como coordinador de campaña del PRD en relación a la elección local y \$2,000.00 por su labor como coordinador de campaña del PRD en relación a la elección local y se lo entregó a Luc Manuel Lugo del que no sabe donde vive. 4) No ha ejercido acciones penales respecto a este asunto. 5) Las aclaraciones fueron

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN ONARIO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN ONARIO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFFORN98202013 NEUFORN19502 214 Cuadrante	30/12/2013 19/05/2014	UFFORN98202013 37/5/2013	17/02/2014	Personal	NEUFORN19502014 06/02/14 Oficio al vocal	19/05/2014	Personal							04/08/2014	SI	SI	-	-	-	-	SI	No recibido	Recibí \$300.00 por haber sido representante ante casilla que electo por haber sido representante ante casilla. Y que la persona que se me entregó es el señor Luciano Jimenez Lanza actual delegado de la comunidad. 4) No ha ejercido acciones penales respecto a este asunto. 5) Las actuaciones fueron en redundancia a que no recibí el	Recibí \$300.00 por haber sido representante ante casilla que electo por haber sido representante ante casilla. Y que la persona que se me entregó es el señor Luciano Jimenez Lanza actual delegado de la comunidad. 4) No ha ejercido acciones penales respecto a este asunto. 5) Las actuaciones fueron en redundancia a que no recibí el
UFFORN98202013		UFFORN98202013 37/7/2013	1/02/2014	Personal										2/03/2014	SI	SI	-	-	-	-	-	No recibido	Nego rotundamente haber recibido tal cantidad, como tampoco es mi firma la que aparece en tal documento.	
UFFORN98202013 NEUFORN19502 214 Cuadrante	30/12/2013 19/05/2014	UFFORN98202013 37/5/2013	2/30/2014	Por un tercero	NEUFORN19502014 06/02/14 Oficio al vocal	03/05/2014	Personal							04/08/2014	SI	SI	-	-	-	-	SI	No recibido	Fue representante de casilla el día de la elección correspondiente a mi firma.	

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (40)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORN/98/02/013 INE/UFORN/198/02 P14. Cuantitativo	30/12/2013 19/05/2014	UFORN/98/02/013 30/12/2013	09/02/2014	Personal	NE/UFORN/198/02 30/01/14 Oficio al vocal	22/05/2014	Personal							04/03/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	No recibí	-	1) Que no ratifico ni el contenido ni la firma que don es saya, que no he firmado ni recibido dinero alguno. 4) Que no lo he hecho, pero si lo tengo pensado hacer solo esta esperando tiempo. 5) Que no sabe quien recibí el dinero que admití con el oficio anterior se enteró del asunto.
UFORN/98/02/013 INE/UFORN/198/02 P14. Cuantitativo	30/12/2013 19/05/2014	UFORN/98/02/013 30/12/2013	17/07/2014	Por un tercero	NE/UFORN/198/02 30/01/14 Oficio al vocal	12/05/2014	Personal							04/03/2014	SI	SI	-	SI	-	-	No recibí	-	1) No es firma mia y desconozco. 2) Captura de datos, de datos, active representada. INE contra (sic). 3) No hubo pago no es mi firma. 4) No hice ninguna denuncia. 5) Reservo mi comentario.
UFORN/98/02/013	30/12/2013	UFORN/98/02/013 30/05/2013	04/02/2014	Personal										20/03/2014	SI	SI	-	SI	-	-	No recibí	-	Informe que no recibí esa cantidad, pues en realidad recibí \$1,000.00 en mano sin esperar o firmar recibo alguno. La firma estampada no corresponde a la mia.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	DESCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DESCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DESCONOCE LAJORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LAJORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UJFORN/98262013 NEJFORN/19562014 1914 Cuantitativo	30/12/2013 19/05/2014	UJFORN/98262013 38/7/2013	17/02/2014	Personal	NEJFORN/19562014 30/2/14 Oficial vocal	11/05/2014	Personal							SI	SI	SI	-	-	-	No recibido	-	1) No he recibido el recurso que se menciona. 2) No he podido hacer recibido algún recurso por ningún concepto. 4) No he recibido acciones penales respecto a este asunto aunque pienso que si. 5) Las actuaciones fueron en su momento a que no recibí el recurso indicado en el recibo antes mencionado y que, aunque la firma es correcta, no he recibido el recurso.	
UJFORN/98262013	30/12/2013	UJFORN/98262013 38/8/2013	17/02/2014	Personal										SI	SI	-	-	-	-	No recibido	-	Manifiesto que no recibí tal recurso que se menciona, ni por correo electrónico, ni por teléfono, ni por cualquier otro medio de comunicación. 4) No he recibido acciones penales respecto a este asunto aunque pienso que si. 5) Las actuaciones fueron en su momento a que no recibí el recurso indicado en el recibo antes mencionado y que, aunque la firma es correcta, no he recibido el recurso.	
UJFORN/98262013	30/12/2013	UJFORN/98262013 38/9/2013	17/02/2014	Personal										SI	SI	-	-	-	-	No recibido	-	Manifiesto que no recibí tal recurso que se menciona, ni por correo electrónico, ni por teléfono, ni por cualquier otro medio de comunicación. 4) No he recibido acciones penales respecto a este asunto aunque pienso que si. 5) Las actuaciones fueron en su momento a que no recibí el recurso indicado en el recibo antes mencionado y que, aunque la firma es correcta, no he recibido el recurso.	

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS															RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGEN SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (40)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (41)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (42)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORN68202013	30/12/2013	UFORN68202013	09/02/2014	Personal										20/03/2014	SI	SI	-	-	-	-	SI	No recibí	Fue representante de la Casa en la sesión 433 por la Comisión de Movimiento Progresista en la sesión 438.	Que no es el contenido y firmo así como el origen del acuse de recibo, según desde este momento haber recibido la cantidad que en el mismo se consigna, aclarando que si la representante de la Casa de la Comisión de Movimiento Progresista en la sesión 438.
UFORN68202013	30/12/2013	UFORN68202013	09/02/2014	Personal										20/03/2014	SI	SI	-	-	-	-	-	No recibí		Nada en virtud que nunca he recibido cantidad alguna, ni mucho menos haber recibido algún documento antes citado.
UFORN68202013	30/12/2013	UFORN68202013	14/07/2014	Por un tercero	ME UFORN68202013	04/09/2014	Personal							04/09/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí		1) Manifiesto bajo protesta que no recibí ninguna cantidad además la suma que aparece no la reconozco por los datos. 2) No aplica. 3) No aplica. 4) No me reservo el derecho de hacerlo. 5) Que la autoridad responsable conforme a la ley y se sancione a los responsables.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS								
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (40)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)
UFORN/98/02/013	30/12/2013	14/01/2014	Personal										23/01/2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	Nego calificación que se me haya dado la cantidad cobrada en el recibo, en ningún momento he recibido en la fecha que se cita del recibo, la cantidad que se cita, no resulta ser mi firma la que se encuentra estampada en el recibo.
UFORN/98/02/013	30/12/2013	13/01/2014	Personal										04/02/2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	cantidad de dinero de la calificación Movimiento Progresista y que se basó en mi firma. 2) No procede. 3) No procede. 4) Ninguno bajo protesta de decir verdad que no he aplicado acción para alguna persona reservo el derecho a hacerlo. Si fuere necesario solicito que las autoridades resuelvan este asunto
UFORN/98/02/013	30/12/2013	13/01/2014	Personal										04/02/2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	verificado que la firma que aparece en el recibo que se me presenta no es la mía, además de manifestar que en ningún momento recibí cantidad alguna como simulación de la calificación Movimiento Progresista. 2) No aplica. 3) No aplica. 4) Hasta esta fecha no he aplicado acción para resolverlo. 5) Que el INE debe resolverlo

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGEN SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO/OCUEST. ONARIO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO/OCUEST. ONARIO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (40)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (41)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (42)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)
UFORN/98/02/013 INEUFORN/198/02 P14 Cuadrante	30/12/2013 19/05/2014	UFORN/98/02/013 28/02/2013	14/01/2014	Por un tercero	NEUFORN/198/02/013 05/02/14 Oficial vocal	05/02/2014	Personal							04/03/2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibido	-	1) No recibí ningún apoyo económico por lo que no reconozco mi firma y que aparece en el mismo. 2) No procedo. 3) No procedo. 4) No procedo. 5) No procedo. Que las autoridades procedan conforme a derecho.
UFORN/98/02/013 INEUFORN/198/02 P14 Cuadrante	30/12/2013 19/05/2014	UFORN/98/02/013 28/02/2013	14/01/2014	Por un tercero	NEUFORN/198/02/013 05/02/14 Oficial vocal	05/02/2014	Personal							04/03/2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibido	-	1) No es mi la firma y por lo tanto no reconozco dicha cantidad. 2) No aplico. 4) No he agotado acción alguna. 5) No es mi la firma al se me presenta (sic) ya que en mi RFE de presente no son guiles como se puede ver a simple vista y nunca recibí los \$3,500.00 que contiene el recibo.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORN/82/2013 NEUFORN/158/2014 114 Cuadrante	30/12/2013 19/05/2014	UFORN/83/2013	1/05/2014	Personal	NEUFORN/16/2014 36/2014 Oficio al vocal	11/05/2014	Personal					04/03/2014		SI	SI	SI	-	-	-	No recibí			Se le informa a la persona del INE del estado ya que en ningún momento recibí la cantidad de \$3,500.00 pesos y además verifiqué que la firma en la foto es de él, no corresponde a mi firma. 2) Esta pregunta no aplica ya que como me mencioné en la pregunta 1 nunca recibí esa cantidad de dinero y en ningún momento recibí ni firmé la respuesta. 3) No aplica en relación a la respuesta. 1 y 2, 4) No lo he hecho pero en caso de ser necesario lo haría para defender mi dignidad. 5) Le quiero ver la cara de tanto a uno y por eso abstengo de responder.
UFORN/82/2013 NEUFORN/158/2014 114 Cuadrante	30/12/2013 19/05/2014	UFORN/83/2013	29/07/2014	Personal	NEUFORN/16/2014 36/2014 Oficio al vocal	05/05/2014	Personal							SI	SI	SI	-	-	-	No recibí			1) Estoy completamente indolente por la forma de querer involucrar a personas inocentes y firmes en su partido sin recibir dinero alguno, porque ayudamos por convicción a nuestro partido. 4) No lo he hecho, pero me acordado lo tienen por averiguaciones.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS											
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE QUI RECIPO (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORN/98/02/013	30/12/2013	UFORN/98/02/013	30/01/2014	Personal										2/03/2014	-	-	-	-	\$200.00	-	-	-	No recibí	Solo le pagaron \$200.00 para comida, ya que me fastidaron mi firma en dicho recibo.	Que no he recibido dicho pago del partido en las elecciones pasadas, solo me pagaron \$200.00 para comida, ya que me fastidaron mi firma en dicho recibo.
UFORN/98/02/013	30/12/2013	UFORN/98/02/013	1/01/2014	Personal										2/03/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	-	Se informó que yo nunca he trabajado para algún partido político y en ningún momento he recibido apoyo para mi casa, mucho menos en efectivo, siempre en las campañas me visitan promitiendo apoyo de láminas, comentarios, pla de casa y ningún partido apoya o me paga nada.
UFORN/98/02/013 INEUFORN/198/02/014 Questionario	30/12/2013	UFORN/98/02/013	1/01/2014	Personal	NEUFORN/198/02/014 Oficial vocal	13/09/2014	Personal							04/03/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	-	1) Manifiesto que no recibí ni una cantidad de dinero mi firma fue falsificada. 2) No pido. 3) No pido. 4) No, pero me reservo mi derecho a sueldo. 5) Solicito que las autoridades realicen conforme a derecho y sancionen a los responsables.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (29)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE QUI RECIBO (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UJFORN/98/02/013 INEJFORN/198/02 P14. Cuestionario	30/12/2013 19/05/2014	UJFORN/98/02/013 34/02/2013	17/07/2014	Personal	INEJFORN/198/02 30/12/14 Oficial vocal	05/09/2014	Personal					04/03/2014		SI	SI	SI	-			-	No recibí	-		completamente el contenido de dicho medio en vista de que no recibí ninguna cantidad de dinero como que mi firma fue falsificada. 2) No procede. 3) No procede. 4) Hasta este momento no he agotado acción penal pero me reservo el derecho de hacerlo aunque se que es un delito muy grave. 5) Solicito que éste se
UJFORN/98/02/013 INEJFORN/198/02 P14. Cuestionario	30/12/2013 19/05/2014	UJFORN/98/02/013 34/02/2013	23/07/2014	Personal	INEJFORN/198/02 30/12/14 Oficial vocal	05/09/2014	Personal					04/03/2014		SI	SI	SI	-			-	No recibí	-		cantidad que nunca recibí dinero por la cantidad de \$3300.00 de la cantidad momento progresiva. 2) afirmo que mi firma fue falsificada. 2) No procede. 3) No procede. 4) No pero considero que en cualquier momento puedo hacerlo. 5) En mi carácter como persona honesta solicito a las autoridades que
UJFORN/98/02/013 INEJFORN/198/02 P14. Cuestionario	30/12/2013 19/05/2014	UJFORN/98/02/013 34/02/2013	21/07/2014	Personal	INEJFORN/198/02 30/12/14 Oficial vocal	10/09/2014	Personal					04/03/2014		SI	SI	SI	-			-	No recibí	-		comparado a la cantidad que recibí. 2) No aplica porque en ningún momento recibí esa cantidad de dinero. 3) Tampoco aplica porque como ya mencioné en ningún momento recibí esa cantidad de dinero y nunca firmé ese medio. 4) No lo he hecho porque el partido se comprometió a que ellos iban a

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS												
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE QUI RECIBO (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)		
U.FORN/82/2013 NEUFORN/196/2014 114. Cuadrante	30/12/2013 19/05/2014	U.FORN/82/2013 24/02/2013	21/07/2014	Personal	NEUFORN/196/2014 06/05/2014 Oficio al vocal	11/09/2014	Personal							04/03/2014	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	-		La persona del RNE no presenta ni firma y la cantidad que se especifica no la recibí. 2) Esta pregunta no aplica porque en realidad no recibí el monto que se especifica en el auto y no firmé el auto. 3) Esta pregunta no aplica. 4) No lo he hecho. 5) Estoy incómodo porque ese tipo de acciones no se hacen.	
																									Realizo actividades políticas relacionadas a la campaña electoral.	
U.FORN/82/2013	30/12/2013	U.FORN/82/2013 24/02/2013	13/07/2014	Por un tercero										20/03/2014	SI	SI	-	\$300.00	-	-	-	SI	No recibí			
U.FORN/82/2013	30/12/2013	U.FORN/82/2013 24/02/2013	13/07/2014	Personal										20/03/2014	SI	SI	-	-	-	-	-	SI	No recibí			No me dan ningún dinero como lo menciona el documento. Además ni firma la ballacera, durante todo este tiempo que trabajé no recibí nada.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORM98202013 NEUFORN18592 314 Cuadrante	30/12/2013 19/05/2014	UFORM98202013 30/12/2013 19/05/2014	1/01/2014	Personal	NEUFORN18592 06/05/14 Oficio al vocal	11/05/2014	Personal					04/03/2014		SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	Verificamos que la cantidad de dinero que dice en el recibo no fue la que recibí y a firme no corresponde a la misma. 2) Esta pregunta no aplica ya que como mencioné en la pregunta pero no recibí esa cantidad de dinero y tampoco firme tal recibo. 3) Tampoco aplica debido a la respuesta de la pregunta 1 y 2. 4) No lo he hecho pero lo haré en caso necesario. 5) No me gustó lo que nos pidieron porque no se veía que querían con nosotros porque nosotros trabajamos pero no nos gusta que nos pidan cosas.	Verificamos que la cantidad de dinero que dice en el recibo no fue la que recibí y a firme no corresponde a la misma. 2) Esta pregunta no aplica ya que como mencioné en la pregunta pero no recibí esa cantidad de dinero y tampoco firme tal recibo. 3) Tampoco aplica debido a la respuesta de la pregunta 1 y 2. 4) No lo he hecho pero lo haré en caso necesario. 5) No me gustó lo que nos pidieron porque no se veía que querían con nosotros porque nosotros trabajamos pero no nos gusta que nos pidan cosas.
UFORM98202013 NEUFORN18592 314 Cuadrante	30/12/2013 19/05/2014	UFORM98202013 30/12/2013 19/05/2014	21/07/2014	Por un tercero	NEUFORN18592 06/05/14 Oficio al vocal	10/09/2014	Personal					04/03/2014		SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	1) No recibí la cantidad especificada; 2) No aplica. 3) No hubo pago de esa cantidad. 4) Verdad, no es mi firma. 5) Nunca firme, no recibí la cantidad, nunca vi el documento para firmarlo.	1) No recibí la cantidad especificada; 2) No aplica. 3) No hubo pago de esa cantidad. 4) Verdad, no es mi firma. 5) Nunca firme, no recibí la cantidad, nunca vi el documento para firmarlo.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO CUESTIONARIO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO CUESTIONARIO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)
UJFORN/98202013 ANEJFORN/156/2014 214 Cuicuilco	20/12/2013 19/05/2014	UJFORN/36552013	1/05/2014	Personal	NEUFORNI/36552013 Oficio al vocal	11/05/2014	Personal							14/02/2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	1) Contiene que se recibió material para una cantidad de dinero que en realidad no fue la que recibí y además confirmo que la firma no corresponde a la mía es decir es falsa; 2) No sé ya que como reconozco en la pregunta anterior en ningún momento recibí tal cantidad de dinero; 3) Esta pregunta no sé ya que como mencioné en ningún momento firmé tal recibí tampoco recibí tal cantidad; 4) No lo he hecho para de ser necesario lo haré; 5) Pues a mi parecer eso no se vea porque uno los apoya para que hagan cualquier cosa es lo que a
UJFORN/98202013	20/12/2013	UJFORN/36552013	1/05/2014	Por un tercero										23/01/2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE QUE RECIBO (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)
UFORM8202013	30/12/2013	UFORM8202013	13/01/2014	Personal										SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	-	
UFORM8202013	30/12/2013	UFORM8202013	23/01/2014	Personal	NEUFORN18562014	6/02/14	10/02/2014	Personal						SI	SI	-	\$500.00	-	-	-	No recibí		Se recibió el pago de los recursos no corresponden a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo 00332 de fecha 27 de junio de 2012 por lo cual también manifesté que la firma presentada en dicho recibo no corresponde porque no he firmado según recibo. (.) por lo que no corresponde a la cantidad que fue entregada según recibo

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS															RESPUESTA DE CIUDADANOS							
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (29)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)
U.FORN/98/2020/13 INEU.FORN/156/2 P14 Cuestionario	03/12/2013 19/05/2014	U.FORN/98/2020/13 INEU.FORN/156/2 P14 Cuestionario	23/07/2014	Personal	NEU.FORN/156/2014 Oficio al vocal	26/05/2014	No diligenciado							SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	QUE YA SABE A QUE VA EL NOTIFICADOR Y QUE YA DO RESPUESTA AL ASUNTO CUANDO MESES ATRAS LE FUERON A VISITAR Y MANIFESTO CLARAMENTE QUE NUNCA LE HABIA DADO DINERO ALGUNO POR PARTE DE NINGUN PARTIDO POLITICO Y QUE ES MANIFESTO CLARAMENTE QUE NUNCA LE HABIA DADO DINERO	QUE YA SABE A QUE VA EL NOTIFICADOR Y QUE YA DO RESPUESTA AL ASUNTO CUANDO MESES ATRAS LE FUERON A VISITAR Y MANIFESTO CLARAMENTE QUE NUNCA LE HABIA DADO DINERO ALGUNO POR PARTE DE NINGUN PARTIDO POLITICO Y QUE ES MANIFESTO CLARAMENTE QUE NUNCA LE HABIA DADO DINERO
U.FORN/98/2020/13 INEU.FORN/156/2 P14 Cuestionario	03/12/2013 19/05/2014	U.FORN/98/2020/13 INEU.FORN/156/2 P14 Cuestionario	23/07/2014	Por un tercero	NEU.FORN/156/2014 Oficio al vocal	22/05/2014	Personal							SI	SI	SI	-	-	-	No recibí		Y que me reconocen el dinero y me dan apoyo económico o de ninguna otra clase; 4) Que no lo ha hecho, pero pretende hacerlo solo no ha tenido los recursos para imponer la sanción; 5) Que quiero saber si quien le entregaron la gratificación, porque a ella no fue, que se investigue a fondo y se sancione a
U.FORN/98/2020/13 INEU.FORN/156/2 P14 Cuestionario INEU.FORN/2636/2014	03/12/2013 19/05/2014 08/11/2014	U.FORN/98/2020/13 INEU.FORN/156/2 P14 Cuestionario	23/07/2014	Personal	NEU.FORN/156/2014 Oficio al vocal	12/05/2014	No diligenciado	INEU.FORN/2636/2014 26/07/2014	17/12/2014	Personal				SI	SI	SI	-	-	-	No recibí		Por este medio me pongo a informar que no recibí ningún tipo de reconocimiento por actividades políticas en campañas electorales por parte de la Coalición Movimiento Progresista.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS															RESPUESTA DE CIUDADANOS								
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN ONARIO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN ONARIO (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN ONARIO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (40)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (41)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (42)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)
UFORN98202013	03/12/2013	UFORN98202013	29/01/2014	Personal										1/02/2014	SI	SI	-	SI	-	-	No recibí	Fue lo como representante de casilla	Que es hijo de toda familia que yo he vivido, he vivido tal reconocimiento y he vivido económico, y en cuanto a la firma que aparece en el recibo en concepto no es mi firma y a todos los que he trabajado. Asimismo, informo que el día de la jornada electoral 1 de julio de 2012, si participé como representante general de la casilla.
UFORN99602013	04/12/2013	UFORN99602013	1/03/2014	Personal										2/03/2014	SI	SI	-	SI	-	-	No recibí	Indica que fue representante de la casilla por el PRD.	No es cierto que yo haya recibido alguna cantidad, por lo tanto informo que como representante del Partido de la Revolución Democrática en las pasadas elecciones me gratificaron solamente con la cantidad \$700.00 y el cual me entregaron en la mano, por lo tanto no firmé ningún documento, si chequeo alguno.
UFORN99602013	04/12/2013	UFORN99602013	1/03/2014	Por un tercero										2/10/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	No recibí	-	Lo niego en su totalidad, manifiesto que nunca firmé un recibo de reconocimiento por actividades políticas en campaña federal, por lo tanto, no recibí tal cantidad de dinero.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RESPUESTA (43)	OBSERVACIONES (44)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (45)	
UFORN/99602013	30/07/2013	UFORN/99602013	11/03/2014	Personal										21/03/2014	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	-	Lo niego en su totalidad, manifiesto que nunca firmé un recibo de reconocimiento por actividades políticas en campaña federal, por lo tanto, no recibí tal cantidad de dinero.
UFORN/99602013	30/10/2013	UFORN/99602013	11/03/2014	Por un terreno										24/03/2014	SI	SI	-	SI	-	-	-	No recibí	Trabajé en el edificio político del candidato presidencial, pero, cabe señalar que la suscripción de la cantidad de \$1,000.00 y que me lo pagaron en efectivo a la mano en un sobre de dinero anónimo, personal que se desvaneció al prescribir el proyecto del municipio candidato a Diputado Federal Marcos Rosendo Medina Terasca. Que trabajé en el edificio político del candidato presidencial, pero, cabe señalar que la suscripción de la cantidad de \$1,000.00 y que me lo pagaron en efectivo a la mano en un sobre de dinero anónimo, personal que se desvaneció al prescribir el proyecto del municipio candidato a Diputado Federal Marcos Rosendo Medina Terasca.	

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS											
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (40)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (41)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (42)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)		
UFFORN/99602013	04/12/2013	UFFORN/ 30/11/2013	09/03/2014	No diligenciado										24/03/2014	SI	SI	-	-	-	SI	No recibí	Trabajé en el activismo político del candidato presidencial, senador y diputado federal de su distrito electoral al como presidente municipal de Jalisco de México, Tepeco.	en ningún momento recibí recibo alguno por la cantidad \$3,300.00 y que tampoco recibí dicha cantidad y que ni firma ni es la que se encuentra estampada en dicho recibo, cabe señalar que la suscrita no que recibí la cantidad de \$3,000.00 y que me lo pagaron en efectivo a la mano en un sobre de dinero amarrado, personal que se desvaneció al primer al proyecto del entonces candidato a Diputado Federal Marcos Rosendo Medina Figueroa. Que trasé en el sobre una copia de la cuenta bancaria.		
UFFORN/99602013	04/12/2013	UFFORN/ 30/12/2013	09/03/2014	No diligenciado										21/03/2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	Lo recibo en su totalidad, manifiesto que nunca tuve un recibo de reconocimiento por actividades políticas en campaña federal, por lo tanto, no recibí tal cantidad de dinero.		

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS															RESPUESTA DE CIUDADANOS							
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)
UFORM99602013	04/12/2013	UFORM99602013	11/03/2014	Personal										SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	Lo niego en su totalidad, manifiesto que nunca recibí un recibo de reconocimiento por actividades políticas en campaña federal, por lo tanto, no recibí tal cantidad de dinero.
UFORM99602013	04/12/2013	UFORM99602013	12/02/2014	Personal										SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	No permito manifestar que nunca recibí un recibo de reconocimiento por actividades políticas en campaña federal, por lo tanto no recibí dicho dinero
UFORM99602013 INEUFORM19562014 Questionario	04/12/2013	UFORM99602013	17/02/2014	Por un tercero	INEUFORM19562014 Oficio al vocal	30/05/2014	Personal							SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	1) Desconozco el recibo del contenido de un recibo que no recibí, no es mi firma. 2) No recibí ninguna actividad de ningún partido. 3) No recibí ningún dinero. 4) No levanté ninguna demanda. 5) No conozco el recibo y el dinero que menciona ni mucho menos mi firma.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORN99902013 INEUFORN19562 P14. Cuestionario	04/12/2013 19/05/2014	UFORN 30/23/201 3	1/01/2014	Personal	NEUFORN19562 06/20/14 Oficial vocal	30/05/2014	Personal					04/03/2014		SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	1) Desconozco el recibo, no recibí ningún pago y no es mi firma; 2) No recibí actividad alguna para el partido; 3) No recibí ningún pago; 4) No he levantado ninguna denuncia; 5) Desconozco el recibo, no recibí ningún pago y mi firma no es.	
UFORN99902013 INEUFORN19562 P14. Cuestionario	04/12/2013 19/05/2014	UFORN 30/23/201 3	1/70/2014	Por un tercero	NEUFORN19562 06/20/14 Oficial vocal	30/05/2014	Personal					04/03/2014		SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	1) Desconozco el recibo, no recibí dinero y no corresponde a mi firma; 2) No recibí ninguna actividad alguna para el partido; 3) No recibí dinero; 4) No recibí ninguna denuncia; 5) Desconozco el recibo y no recibí dinero, ni mi firma es.	
UFORN99902013 INEUFORN19562 P14. Cuestionario	04/12/2013 19/05/2014	UFORN 30/23/201 3	1/01/2014	Personal	NEUFORN19562 06/20/14 Oficial vocal	25/05/2014	Personal					04/03/2014		SI	SI	-	-	-	-	SI	No recibí	Sólo cedí la cédula el día de la elección	1) No tengo conocimiento de ningún recibo; 2) La única actividad fue ceder la cédula de mi localidad para no recibir ningún apoyo económico; 3) No recibí apoyo económico ni para un afiliado; 4) Ninguna acción para un afiliado; 5) No recibí ni siquiera el apoyo económico y ahora que mi firma no corresponde a mi firma, sino que se parece al hijo del fabricante.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORM99602013	04/12/2013	UFORM99602013	09/25/2013	17/07/2014	Por un tercero								24/03/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	Se me entregó el documento por correo electrónico, no soy abogado, ni nada que se le parezca, solo me presenté a ejercer mi derecho de ciudadano que soy al proceso de votación y sin tener con alguna al documento otorgo en el momento por lo que dando cumplimiento a su requerimiento legal verifico que me entero de dicho
UFORM99602013	04/12/2013	UFORM99602013	09/26/2013	16/07/2014	Personal	28/03/2014	Personal						04/03/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	1) Desconozco el recibo, no recibí, no es mi firma. 2) No recibí ninguna actividad al partido; 3) No recibí dinero. 4) No tenía denuncia. 5) No recibí dinero y no es mi firma
UFORM99602013	04/12/2013	UFORM99602013	09/27/2013	16/07/2014	Personal								24/03/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	que no he realizado actividades políticas alguna en partido o candidato, por lo que no he recibido pago o endowment por actividad alguna así también le informo que la firma que aparece en el recibo de "recibo reconocimiento" no es firma estampada de puro y beta de la que suscribo, ya que se trata sin duda de

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (2)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	Nº OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	ENCUENTRO ONOM (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er ENCUESTRAS ONOM (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DESCONOCER PRIMA DE RECIBO (37)	DESCONOCER CONTENIDO DE RECIBO (38)	DESCONOCER LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCER PRIMA DE RECIBO (41)	RECONOCER CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCER LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (48)
UFORN9902013	04/12/2013	UFORNA X029/2013 3	18/01/2014	Personal										2-03-2014	SI	SI	SI		-	-	No recibí	-	que no he realizado actividades alguna en período de suspensión, por lo que no he recibido pago o empujamiento por actividad alguna así también le informo que la firma que aparece en el recibo de "recibo reconocimiento" no es firmada autorizada de auto y letra de la que aparece, ya que se trata únicamente de un recibo.
UFORN9902013 NEUFORN1562 19/05/2014 Dianissimo		UFORNA X029/2013 3	21/01/2014	Personal	NEUFORN1562 26/02/14 Oficio al vocal	12/05/2014	Personal							0-03-2014	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	Acepta haber recibido un recibo consistente en \$400.00 en efectivo por haber sido representante ante casilla y que a la persona que me los entregó, sólo lo conozco por Juan Carlos Cava, para que signede ante. 4) No ha especificado acciones pendientes respecto a este asunto; 5) Las aclaraciones fueron en referencia a que no recibí el importe indicado en el recibo antes mencionado y que tampoco la firma	

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS								
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO/QUEJAS (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO/QUEJAS (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)
UFORN/99/2013 NEUFORN/2567/2014	31/12/2013 31/12/2014	UFORN/3033/2013 3	31/07/2014	No asignado	NEUFORN/16/2014 30/07/2014	25/11/2014	Personal							SI	SI	SI	-	-	-	No recibí		No es cierto (...) y por este motivo afirmo que no tuve participación en ningún cargo, puesto u organización política de ningún partido y hago constar que en ningún momento recibí el monto de \$4,000.00 pesos ni ninguna ayuda de parte de nadie, ni tampoco constar que no he firmado ningún documento y también que la firma que aparece en el recibo no es la mía haciendo mención en que hubo falsificación de mi firma y solicito mi información personal sin ninguna autorización.
UFORN/99/2013 NEUFORN/186/2014	31/12/2013 10/05/2014	UFORN/3033/2013 3	21/07/2014	Personal	NEUFORN/16/2014 06/07/2014 Oficio al vocal	05/05/2014	Personal							SI	SI	-	-	-	-	No recibí	Asigna haber recibido un recibo consistente en \$400.00 por haber sido representante ante la mesa y no identifica el nombre de la persona que se le entregó. 4. No ha ejercido acciones penales respecto a este asunto; 5. Las declaraciones fueron en reclusión a que no recibió el importe indicado en el recibo antes mencionado y que, aunque la firma que aparece en	Asigna haber recibido un recibo consistente en \$400.00 por haber sido representante ante la mesa y no identifica el nombre de la persona que se le entregó. 4. No ha ejercido acciones penales respecto a este asunto; 5. Las declaraciones fueron en reclusión a que no recibió el importe indicado en el recibo antes mencionado y que, aunque la firma que aparece en

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS															RESPUESTA DE CIUDADANOS							
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	FECHA DE RESPUESTA (35)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORN/99/02/2013 INEUFORN/19/02/2014 D14 Cuadrante	30/34/2013 3	21/01/2014	Personal	NEUFORN/96/2014 Oficial vocal	10/02/2014	Personal						04/02/2014	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	Accepta haber recibido un recurso consistente en \$400.00 en concepto de haber sido representante ante casilla. Y no consta a la persona que se los entregó y que prima sobre dicho vivir. 4) No ha agotado acciones penales respecto a este asunto. 5) Las actuaciones fueron en redundancia a que no recibió el informe indicado en el medio antes mencionado.	Accepta haber recibido un recurso consistente en \$400.00 en concepto de haber sido representante ante casilla.	En la fecha indicada, no recibí el recurso.
UFORN/99/02/2013 INEUFORN/19/02/2014 D14 Cuadrante	30/36/2013 3	31/01/2014	Personal	NEUFORN/96/2014 Oficial vocal	08/02/2014	Personal						04/02/2014	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	Accepta haber recibido un recurso consistente en \$400.00 en concepto de haber sido representante ante casilla. Dicho recurso fue entregado por una persona del sexo femenino del que desconoce su nombre y dirección. 4) No ha agotado acciones penales respecto a este asunto. 5) Las actuaciones fueron en redundancia a que no recibió el informe indicado en el medio antes mencionado.	Accepta haber recibido un recurso consistente en \$400.00 en concepto de haber sido representante ante casilla.	En la fecha indicada, no recibí el recurso.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS											
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE QUE RECIBO (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UJFORN9902013 INEJFORN15562 314 Cuernavaca	14/12/2013 19/05/2014	UJFORN9902013 30/37/2013 3	23/01/2014	Personal	NEJFORN15562 30/37/2013 Oficio al vocal	17/05/2014	Personal							04/03/2014	-	SI	-	-	-	SI	-	-	No recibí	firmado el recibo, manifeste no haber recibido el recurso indicado en dicho documento ni alguna otra solicitud, solo recibí promesas de prestación de un préstamo por una persona del sexo femenino del que desconoce su nombre y dirección.4) No ha ejecutado acciones penales respecto a este asunto; 5) Las aclaraciones fueron en redundancia a que no recibí el recurso indicado.	El PMP-CCA folio 3469, 2) Manifesta no haber recibido el recurso indicado en dicho documento ni alguna otra solicitud, solo recibí promesas de prestación de un préstamo por una persona del sexo femenino del que desconoce su nombre y dirección.4) No ha ejecutado acciones penales respecto a este asunto; 5) Las aclaraciones fueron en redundancia a que no recibí el recurso indicado.
UJFORN9902013 INEJFORN15562 314 Cuernavaca	14/12/2013 19/05/2014	UJFORN9902013 30/38/2013 3	21/01/2014	Personal	NEJFORN15562 30/38/2013 Oficio al vocal	08/05/2014	Personal							04/03/2014	SI	SI	-	-	\$400.00	-	-	-	No recibí	Acepta haber recibido \$400.00 por haber sido representante ante la compañía y que a la persona que se los entregó en efectivo, sólo lo conocí por Juan Carlos Cova, pero que se los entregó a una donde vive; 4) No ha ejecutado acciones penales respecto a este asunto; 5) Las aclaraciones fueron en redundancia a que no recibí el recurso indicado.	Acepta haber recibido \$400.00 por haber sido representante ante la compañía y que a la persona que se los entregó en efectivo, sólo lo conocí por Juan Carlos Cova, pero que se los entregó a una donde vive; 4) No ha ejecutado acciones penales respecto a este asunto; 5) Las aclaraciones fueron en redundancia a que no recibí el recurso indicado.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS							
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGEN SOLICITUD VOCAL (24)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (25)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (26)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (27)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN (28)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (29)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (30)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (31)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (32)	FECHA DE RESPUESTA (33)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)		
UFFORN99020713 UFFORN1902 UFFORN1902014 014 Cuadrante	31/12/2013	UFFORN30/02/2013 30/02/2013 19/02/2014	21/01/2014	Personal	NEUFORN19/02 05/02/14 Oficio al vocal	12/02/2014	Personal			04/02/2014	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	Acepta haber recibido \$400.00 por haber sido representante en la casilla que Juan Carlos Cava, pero que ignora en la entrega Juan Carlos Cava, pero que ignora dónde vive. 4) No ha querido acciones penales respecto a este asunto. 5) Las actuaciones fueron en redundancia a que no recibí el dinero de la casilla.	Recibí \$474, ni haberlo firmado, 2) Acepta haber recibido un dinero consistente en \$400.00 en concepto de haber sido representante en la casilla y que a la persona que me los entregó, sólo lo conozco por Juan Carlos Cava, pero que ignora dónde vive. 4) No ha querido acciones penales respecto a este asunto. 5) Las actuaciones fueron en redundancia a que no recibí el dinero de la casilla.		
UFFORN99020713	31/12/2013	UFFORN30/03/2013 30/03/2013	10/02/2014	Personal						24/03/2014	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí		Disconozco el origen del recibo por concepto de recibos de reconocimiento de actividades realizadas en campaña. Seguí hecho por la Casación. Momento entregado a mi nombre ya que nunca recibí la cantidad de \$4.000.00 ya que la firma que aparece en el recibo no es mi firma.		

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE QUE RECIBO (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORN99602013 INEUFORN156/2014 Questionario	31/12/2013 19/05/2014	UFORN 30/05/2013 3	22/01/2014	Personal	INEUFORN156/2014 Oficial vocal	20/05/2014	Personal					04/08/2014		SI	SI	-	\$400.00	-	-	-	No recibí	Recibí \$400.00 por haber colonizado como representante de castilla el día de la elección	Recibí REP-ACOA folio 3477; 2) Manifesta no haber recibido el recibo indicado en dicho documento, recibió la cantidad de \$400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 m.n.) en efectivo por una persona de la que desconozco su nombre y apellido por haber colonizado como representante de castilla el día de la elección. 4) No ha ejercido acciones penales respecto a este asunto; 5) Las adiciones fueron en conformidad a que no recibí el	Recibí REP-ACOA folio 3477; 2) Manifesta no haber recibido el recibo indicado en dicho documento, recibió la cantidad de \$400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 m.n.) en efectivo por haber colonizado como representante de castilla el día de la elección y no recibí de una persona a quien solo conozco como Ana Luisa y de la que no sabe donde vive; 4) No ha ejercido acciones penales respecto
UFORN99602013 INEUFORN156/2014 Questionario	31/12/2013 19/05/2014	UFORN 30/05/2013 3	17/02/2014	Personal	INEUFORN156/2014 Oficial vocal	18/05/2014	Personal					04/08/2014		SI	SI	-	\$200.00	-	-	-	No recibí	Recibí \$200.00 por haber colonizado como representante de castilla y/o recibí de Ana Luisa	Recibí REP-ACOA folio 3478; 2) Manifesta no haber recibido el recibo indicado en dicho documento, recibió la cantidad de \$200.00 (doscientos pesos 00/100 m.n.) en efectivo por haber colonizado como representante de castilla y/o recibí de Ana Luisa	Recibí REP-ACOA folio 3478; 2) Manifesta no haber recibido el recibo indicado en dicho documento, recibió la cantidad de \$200.00 (doscientos pesos 00/100 m.n.) en efectivo por haber colonizado como representante de castilla y/o recibí de Ana Luisa

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS															RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO/OCUEST ONARIO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO/OCUEST ONARIO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE RECIBO (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORM9902013 INEUFORM267 2014	04/02/2013	UFORM 30/09/2013 31/11/2014	04/02/2014	No diligenciado	NEUFORME 30/11/2014	27/11/2014	Personal							27/11/2014	SI	SI	-	-	-	-	SI	No recibí			Pago de su conocimiento efectivamente, al estuve como representante de la casa de don de 2012, para Presidente de la República, recibiendo únicamente la cantidad de \$400.00, en efectivo y no así como lo menciona el escrito que se me hizo llegar
UFORM9902013 INEUFORM19602 2014 Cuernavaca INEUFORM267 2014	04/02/2013	UFORM 30/09/2013 31/11/2014	07/02/2014	Por un tercero	NEUFORME 30/11/2014 Oficio al vocal	23/05/2014	No diligenciado	NEUFORME 25/04/2014	14/11/2014	Personal				18/02/2015	SI	SI	-	-	-	-	SI	No recibí			Recibí \$400.00 por haber colaborado como representante de la Sección 262 del PRD donde la cantidad de \$400.00 pesos en un cheque y no la cantidad de \$4,000.00 pesos que dice el recibo. La firma que dice en que yo recibí el reconocimiento esa firma no es mía

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS															RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (40)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (41)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORN/99/02/2013 NEUFORN/15/02/14 014 Cuadronario	31/12/2013 10/05/2014	UFORN/30/01/2013 3	23/01/2014	Personal	NEUFORN/15/02/14 05/02/14 Oficio al vocal	15/05/2014	Personal							04/05/2014	SI	SI	-	-	-	-	No recibí		Recibí \$200.00 por haber colaborado como representante de canal y lo autorizado de salida el día de la elección y lo recibí de una persona a quien solo conozco como Ana Luisa y de la que no sé donde vive; 4) No he aplicado acciones penales respecto a este asunto fallado en los tribunales.	Recibí REP/ACCO folio 3482. Manifesta no haber recibido el recurso indicado en dicho documento, recibió la cantidad de \$200.00 (doscientos pesos 00/100 m.n.) en efectivo por haber colaborado como representante de canal y lo autorizado de salida el día de la elección y lo recibí de una persona a quien solo conozco como Ana Luisa y de la que no sé donde vive; 4) No he aplicado acciones penales respecto a este asunto fallado en los tribunales.	
UFORN/99/02/2013 NEUFORN/15/02/14 014 Cuadronario	31/12/2013 10/05/2014	UFORN/30/01/2013 3	17/02/2014	Personal	NEUFORN/15/02/14 05/02/14 Oficio al vocal	15/05/2014	Personal								SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí		Indica que no va a contestar ningún cuestionamiento y que no ha participado en ningún asunto de este tipo, al igual que en la ocasión anterior no iba a comparecer con ninguna información.	Indica que no va a contestar ningún cuestionamiento y que no ha participado en ningún asunto de este tipo, al igual que en la ocasión anterior no iba a comparecer con ninguna información.
UFORN/99/02/2013 NEUFORN/15/02/14 014 Cuadronario	31/12/2013	UFORN/30/01/2013 3	1/02/2014	Personal										24/03/2014	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí		Manifiesto que no recibí tales recursos que recursos de oficio, ni por cheque, tarjeta o efectivo, por lo que se investiga tal recurso, que para mí nunca lo conocí.	Manifiesto que no recibí tales recursos que recursos de oficio, ni por cheque, tarjeta o efectivo, por lo que se investiga tal recurso, que para mí nunca lo conocí.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO NOTIFICACIÓN (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO NOTIFICACIÓN ONARIO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN ONARIO (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN ONARIO (29)	3er OFICIO NOTIFICACIÓN ONARIO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO NOTIFICACIÓN (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE QUE RECIBO (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFDNRV9902013 INEUFDNRV18362 214 Cuadrante	04/12/2013 19/05/2014	UFDNRV 30/04/2013 3	1/02/2014	Personal	INEUFDNRV18362 06/02/14 Oficio al vocal	11/02/2014	Personal					04/03/2014		SI	SI						No recibido	Acepta haber recibido \$400.00 por haber sido representante ante junta y que a la persona que se los entregó en efectivo, 690 lo comos por José Valencia Pérez, del que desconoce el domicilio; 4) No ha agitado acciones penales respecto a este asunto; 5) Las aclaraciones fueron en redundancia a lo que no recibió el recibo REP/PCO-2013-3465, ni haberlo firmado; 2) Acepta haber recibido un recibo consistente en \$400.00 correspondientes pesos 00/100 m.n. por haber sido representante ante junta y que a la persona que se los entregó en efectivo, 690 lo comos por José Valencia Pérez, del que desconoce el domicilio; 4) No ha agitado acciones penales respecto a este asunto; 5) Las aclaraciones fueron en redundancia a lo que no recibió el recibo REP/PCO-2013-3465, ni haberlo firmado; 2) Acepta haber recibido un recibo consistente en \$400.00 correspondientes pesos 00/100 m.n. por haber sido representante ante junta y que a la persona que se los entregó en efectivo, un individuo de nombre José Valencia Pérez, del que desconoce el domicilio; 4) No ha agitado acciones penales respecto a este asunto; 5) Las aclaraciones fueron en redundancia a lo que no recibió el importe indicado	(1) No reconoce el recibo REP/PCO-2013-3465, ni haberlo firmado; 2) Acepta haber recibido un recibo consistente en \$400.00 correspondientes pesos 00/100 m.n. por haber sido representante ante junta y que a la persona que se los entregó en efectivo, 690 lo comos por José Valencia Pérez, del que desconoce el domicilio; 4) No ha agitado acciones penales respecto a este asunto; 5) Las aclaraciones fueron en redundancia a lo que no recibió el recibo REP/PCO-2013-3465, ni haberlo firmado; 2) Acepta haber recibido un recibo consistente en \$400.00 correspondientes pesos 00/100 m.n. por haber sido representante ante junta y que a la persona que se los entregó en efectivo, un individuo de nombre José Valencia Pérez, del que desconoce el domicilio; 4) No ha agitado acciones penales respecto a este asunto; 5) Las aclaraciones fueron en redundancia a lo que no recibió el importe indicado
UFDNRV9902013 INEUFDNRV18362 214 Cuadrante	04/12/2013 19/05/2014	UFDNRV 30/05/2013 3	17/02/2014	Personal	INEUFDNRV18362 06/02/14 Oficio al vocal	11/02/2014	Personal					04/03/2014		SI	SI						No recibido	Acepta haber recibido \$400.00 por haber sido representante ante junta y que a la persona que se los entregó en efectivo, un individuo de nombre José Valencia Pérez, del que desconoce el domicilio; 4) No ha agitado acciones penales respecto a este asunto; 5) Las aclaraciones fueron en redundancia a lo que no recibió el importe indicado	(1) No reconoce el recibo REP/PCO-2013-3467, ni haberlo firmado; 2) Acepta haber recibido un recibo consistente en \$400.00 correspondientes pesos 00/100 m.n. por haber sido representante ante junta y que a la persona que se los entregó en efectivo, un individuo de nombre José Valencia Pérez, del que desconoce el domicilio; 4) No ha agitado acciones penales respecto a este asunto; 5) Las aclaraciones fueron en redundancia a lo que no recibió el importe indicado

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LAJURES CON PARTIDO (39)	RECONOCE QUI RECIBO (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LAJURES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORM9902013 VOCAL 14	04/12/2013 NEUFORM9902013	UFORM9902013 VOCAL 3	31/07/2014 diligenciado	No diligenciado	NEUFORM9902013 VOCAL 3	25/11/2014 583/2014	Personal							-	-	-	\$200.00	-	-	-	-	No recibí	Participo como representante de la Cautiva	No recibí la cantidad que se me mandó en el recibo, participé una vez por \$200.00, como representante de la Cautiva y un poco asado
UFORM9902013 VOCAL 14	04/12/2013 NEUFORM9902013	UFORM9902013 VOCAL 3	22/07/2014	Personal	NEUFORM9902013 VOCAL 3	10/09/2014	Personal							\$	\$	-	-	-	-	-	\$	No recibí	Fue representante de la Cautiva	1) Desconozco el recibo; 2) Representante de la Cautiva; 3) No recibí la cantidad de \$400.00 que me mandó en el recibo; 4) No; 5) Hago constar que la firma que está en el recibo no es mía.
UFORM9902013 VOCAL 3	04/12/2013	UFORM9902013 VOCAL 3	04/02/2014	Personal	NEUFORM9902013 VOCAL 3									\$	\$	\$	-	-	-	-	-	No recibí		En ningún momento recibí la cantidad de dinero mencionada, para tampoco participé en ninguna campaña electoral en el año 2012, por lo tanto, no conozco como mi firma estampada en el recibo REPÚBLICA

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	DISCONOCE FIRMAS DE RECIBO (36)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMAS DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (46)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORM99902013 VOCAL VOCAL 19/05/2014 14/12/2013	UFORM99902013 VOCAL VOCAL 19/05/2014 14/12/2013	UFORM99902013 VOCAL VOCAL 19/05/2014 14/12/2013	22/07/2014	Personal	UFORM99902013 VOCAL VOCAL 19/05/2014 14/12/2013	10/09/2014	Personal	UFORM99902013 VOCAL VOCAL 19/05/2014 14/12/2013	04/02/2014	SI	-	SI	-	-	-	-	-	-	-	SI	No recibí	Fue representante de casilla	1) Desconozco el recibo que se me entregó; 2) Fui representante en casilla; 3) No recibí la cantidad ni pregunta otra cantidad; 4) No; 5) Desconozco la firma del recibo y desconozco el recibo.
UFORM99902013 VOCAL VOCAL 19/05/2014 14/12/2013	UFORM99902013 VOCAL VOCAL 19/05/2014 14/12/2013	UFORM99902013 VOCAL VOCAL 19/05/2014 14/12/2013	17/07/2014	Personal	UFORM99902013 VOCAL VOCAL 19/05/2014 14/12/2013	04/02/2014	-	-	04/02/2014	-	\$3,000.00	SI	-	-	-	-	SI	-	SI	No recibí	Así en las campañas en Villavieja y le pidieron que firmara el recibo	Así en las campañas en Villavieja y le pidieron que firmara el recibo	
UFORM99902013 VOCAL VOCAL 19/05/2014 14/12/2013	UFORM99902013 VOCAL VOCAL 19/05/2014 14/12/2013	UFORM99902013 VOCAL VOCAL 19/05/2014 14/12/2013	17/07/2014	Personal	UFORM99902013 VOCAL VOCAL 19/05/2014 14/12/2013	21/07/2014	SI	-	21/07/2014	SI	-	-	-	-	-	-	SI	-	-	-	No recibí	-	-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS															RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD ONARIO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD ONARIO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE QUE RECIBO (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
U/FORN/99602013	04/12/2013	U/FORN/99702013	17/01/2014	Personal										21/01/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibido	-	
U/FORN/99602013	04/12/2013	U/FORN/99702013	17/01/2014	Personal										21/01/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibido	-	
U/FORN/99602013	04/12/2013	U/FORN/99702013	16/01/2014	Personal										04/02/2014	SI	SI	SI	-	-	-	-	SI	No recibido	Actual las campañas laborales, no recibió dinero	Actual las campañas laborales, no recibió dinero

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO OCURRE ONARIO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO OCURRE ONARIO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UFORN9902013	UFORN9902013 30/7/2013 3	1/6/17/2014	Personal										1/4/02/2014	SI	SI	-	-	-	-	SI	No recibí	Ayer las campañas fueron, no recibí dinero	
UFORN9902013	UFORN9902013 30/7/4/2013 3	1/7/01/2014	Personal										21/01/2014	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	-	
UFORN9902013 30/8/6/2013 19/02/2014	UFORN9902013 30/8/6/2013 3	21/10/17/2014	Personal	NE UFORN9902013 30/8/2014 Oficial vocal	02/09/2014	Personal							1/4/09/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	1) Desconozco el medio que se me envió; 2) No recibí ninguna actividad para el partido; 3) No recibí ningún dinero; 4) No; 5) La firma que aparece en el recibo no corresponde a la mía.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO ONARIO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO ONARIO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE QUI RECIBO (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)
UJFORN9902013 INEJFORN19562 P14. Cuestionario	04/12/2013 19/05/2014	UJFORN 30/07/2013 3	09/02/2014	Personal	NEJFORN19562 06/08/14 Oficial vocal	03/09/2014	Personal							04/09/2014	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	-	1) Desconozco el recibo; 2) No recibí ninguna actividad; 3) No recibí dinero; 4) No; 5) Mi firma no corresponde.
UJFORN9902013 INEJFORN19562 P14. Cuestionario	04/12/2013 19/05/2014	UJFORN 30/08/2013 3	09/02/2014	Personal	NEJFORN19562 06/08/14 Oficial vocal	03/09/2014	Personal							04/09/2014	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	-	1) Desconozco el recibo que me presentaron; 2) No recibí ninguna actividad para el partido; 3) No recibí dinero alguno; 4) No; 5) La firma que aparece en el recibo no coincide con la mía.
UJFORN9902013 INEJFORN19562 P14. Cuestionario	04/12/2013 19/05/2014	UJFORN 30/09/2013 3	09/02/2014	Personal	NEJFORN19562 06/08/14 Oficial vocal	03/09/2014	Personal							04/09/2014	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	-	1) Desconozco el recibo que me presentaron; 2) No recibí ninguna actividad para el partido; 3) No recibí dinero; 4) No; 5) Desconozco la firma que aparece en el recibo.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (29)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE QUE RECIBO (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)
UFORN99902013 VOCAL VOCAL 19/05/2014	UFORN99902013 VOCAL VOCAL 19/05/2014	UFORN99902013 VOCAL VOCAL 19/05/2014	27/07/2014	Personal	NEUFORN19562 Oficio al vocal	03/09/2014	Personal							04/09/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	1) No reconozco el recibo, no corresponde mi firma, ni recibí ningún dinero; 2) No realicé ninguna actividad para el partido; 3) No recibí ningún dinero; 4) No he efectuado ninguna acción para el partido; 5) Desconozco el recibo, mi firma no corresponde, no recibí dinero.
UFORN99902013 VOCAL VOCAL 19/05/2014	UFORN99902013 VOCAL VOCAL 19/05/2014	UFORN99902013 VOCAL VOCAL 19/05/2014	27/07/2014	Personal	NEUFORN19562 Oficio al vocal	04/09/2014	Personal							04/09/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	1) Desconozco el recibo que se me presenta; 2) No realicé ninguna actividad para el partido; 3) No recibí ningún dinero; 4) No he efectuado ninguna acción para el partido; 5) Desconozco la firma del recibo porque no es mi firma.
UFORN99902013 VOCAL VOCAL 19/05/2014	UFORN99902013 VOCAL VOCAL 19/05/2014	UFORN99902013 VOCAL VOCAL 19/05/2014	27/07/2014	Personal	NEUFORN19562 Oficio al vocal	03/09/2014	Personal							04/09/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	1) Desconozco el recibo que se me presenta; 2) No realicé ninguna actividad para el partido; 3) No recibí ningún dinero; 4) No he efectuado ninguna acción para el partido; 5) La firma del recibo no corresponde a mi firma.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD ONARIO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD ONARIO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	DISCONOCE FIRMA DE QUI RECIÓ (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE QUI RECIÓ (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE QUI RECIÓ (40)	RECONOCE FIRMA DE QUI RECIÓ (41)	RECONOCE CONTENIDO DE QUI RECIÓ (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)	
UJORN9902013 INEJORN18562 19/05/2014 2014 Cuestionario		UJORN 30/06/2011 3	22/07/2014	Por un tercero	NEJORN18562 30/06/14 Oficio al vocal	03/09/2014	Personal							SI	SI	-	-	-	-	-	SI	No recibí	Fue representante de casilla	1) Desconozco al recibo; 2) No recibí; 3) Representante de casilla; 3) No recibí; 4) Ninguno; 5) La firma del recibo no es mía.
UJORN9902013 INEJORN18562 19/05/2014 2014 Cuestionario		UJORN 30/06/2011 3	21/07/2014	Personal	NEJORN18562 30/06/14 Oficio al vocal	03/09/2014	Personal							SI	SI	SI	-	-	-	-	-	No recibí	-	1) Desconozco al recibo; 2) No recibí; 3) Representante de casilla; 3) No recibí; 4) Ninguno; 5) La firma del recibo no es mía.
UJORN9902013 INEJORN18562 19/05/2014 2014 Cuestionario		UJORN 30/07/2011 3	27/07/2014	Personal	NEJORN18562 30/06/14 Oficio al vocal	04/09/2014	Personal							SI	SI	-	-	-	-	-	SI	No recibí	Fue representante de casilla	1) Desconozco al recibo; 2) Representante de casilla; 3) No recibí; 4) Ninguno; 5) La firma del recibo no es mía.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE LABORES CON RECIBO (40)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (41)	RECONOCE LABORES CON RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)
UFORM99902013 INEUFORM19562 P14. Cuestionario	04/12/2013 19/05/2014	UFORM99902013 09/08/2013 3	21/07/2014	Personal	NEUFORM19562 06/08/14 Oficial vocal	03/09/2014	Personal						04/03/2014	SI	-	-	-	SI	-	-	SI	No recibí	Reconoce el recibo; fue representante de cañal; 3) No recibí la cantidad de \$4,000.00; 4) No; 5) La firma del recibo no es mía.
UFORM99902013 INEUFORM19562 P14. Cuestionario	04/12/2013 19/05/2014	UFORM99902013 09/08/2013 3	22/07/2014	Por un tercero									24/03/2014	SI	SI	SI	-	-	-	-	-	No recibí	Reconoce el concepto de que me hizo reconocimiento de mi actividad económica, dado que no he realizado actividad alguna con partido o cañal, por lo que no he recibido pago o emolumento por actividad alguna; así también la firma que la firma que aparece en el recibo no es la mía.
UFORM99902013 INEUFORM19562 P14. Cuestionario	04/12/2013 19/05/2014	UFORM99902013 09/08/2013 3	27/07/2014	Personal	NEUFORM19562 06/08/14 Oficial vocal	03/09/2014	Personal						04/03/2014	SI	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	Disconoce el recibo; 2) No recibí ninguna actividad; 3) No recibí ningún pago; 4) Negativo; 5) La firma del recibo que me dieron no corresponde con mi firma.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS										
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD ONARIO (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD ONARIO (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	FECHA DE RESPUESTA (36)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE QUI RECIÓ (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)
UFORN99902013 INEUFORN19562 P14. Cuestionario	04/12/2013 19/05/2014	UFORN 31/03/2014 3	27/07/2014	Por un tercero	NEUFORN19562014 06/2014 Oficial vocal	04/09/2014	Personal							04/09/2014	SI	SI	-	-	-	-	SI	No recibí	Fue representante de casilla	1) Desconozco el recibo que se me presenta; 2) Fue representante de casilla; 3) No recibí el pago que menciona el recibo; 4) Ninguno; 5) La firma del recibo no corresponde a la que se me entregó; 6) La firma del recibo no corresponde a la que yo recibí.
UFORN99902013 INEUFORN19562 P14. Cuestionario	04/12/2013 19/05/2014	UFORN 31/04/2014 3	27/07/2014	Personal	NEUFORN19562014 06/2014 Oficial vocal	02/09/2014	Personal							04/09/2014	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	-	1) Desconozco el recibo que se me presenta; 2) No recibí ninguna actividad; 3) No recibí el dinero que se menciona en el recibo; 4) No; 5) Desconozco la firma del recibo ya que no es mía.
UFORN99902013 INEUFORN19562 P14. Cuestionario	04/12/2013 19/05/2014	UFORN 31/05/2014 3	27/07/2014	Personal	NEUFORN19562014 06/2014 Oficial vocal	02/09/2014	Personal							04/09/2014	SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	-	1) Desconozco el recibo en cuestión; 2) No recibí ninguna actividad para ningún partido; 3) No recibí ningún dinero; 4) No; 5) Desconozco el recibo y la firma que este tiene no corresponde a la mía.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS								
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGO SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (30)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)
UFORN99902013 INEUFORN19562 P14. Cuestionario	30/08/2013 30/08/2013 19/05/2014	UFORN99902013 30/08/2013 19/05/2014	16/07/2014	Personal	INEUFORN19562 30/08/2014 Oficial vocal	30/05/2014	Personal					04/03/2014		SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	1) Desconozco el recibo, no recibí el dinero y no es mi firma; 2) No recibí ninguna actividad para el partido; 3) No recibí dinero; 4) No he levantado ninguna denuncia; 5) Desconozco el recibo, no recibí dinero, no es mi firma.
UFORN99902013 INEUFORN19562 P14. Cuestionario	30/08/2013 30/08/2013 19/05/2014	UFORN99902013 30/08/2013 19/05/2014	16/07/2014	Personal	INEUFORN19562 30/08/2014 Oficial vocal	25/05/2014	Personal					04/03/2014		SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	1) Desconozco el recibo que se me presentó y ademas que no recibí dicha cantidad ni mi firma correspondiente; 2) No recibí ninguna actividad, solo esperé mi voto; 3) No recibí ningún pago; 4) No he ejercido acción penal alguna; 5) Desconozco el recibo, la cantidad y la firma del documento.
UFORN99902013 INEUFORN19562 P14. Cuestionario	30/08/2013 30/08/2013 19/05/2014	UFORN99902013 30/08/2013 19/05/2014	16/07/2014	Personal	INEUFORN19562 30/08/2014 Oficial vocal	25/05/2014	Personal							SI	SI	SI	-	-	-	No recibí	-	1) Desconozco el recibo, ademas que no recibí dinero alguno y que mi firma no corresponde; 2) No recibí ninguna actividad para el partido; 3) No recibí ningún dinero; 4) No he levantado ninguna denuncia; 5) Desconozco el recibo, no recibí ningún dinero por actividad del partido y no es mi firma.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS														RESPUESTA DE CIUDADANOS									
OFICIO SOLICITUD VOCAL (23)	FECHA ORIGEN SOLICITUD VOCAL (23)	1er OFICIO SOLICITUD VOCAL (24)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (25)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (26)	2do OFICIO SOLICITUD VOCAL (27)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (28)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (29)	3er OFICIO SOLICITUD VOCAL (29)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (31)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (32)	4to OFICIO SOLICITUD VOCAL (33)	FECHA DE NOTIFICACIÓN (34)	TIPO DE NOTIFICACIÓN (35)	DISCONOCE FIRMA DE RECIBO (37)	DISCONOCE CONTENIDO DE RECIBO (38)	DISCONOCE LABORES CON PARTIDO (39)	RECONOCE QUE RECIBO (40)	RECONOCE FIRMA DE RECIBO (41)	RECONOCE CONTENIDO DE RECIBO (42)	RECONOCE LABORES CON PARTIDO (43)	RESPUESTA (44)	OBSERVACIONES (45)	CONTENIDO DE LA RESPUESTA (46)
UFORM99902013 INEUFORM19562 P14 Cuadrante	04/12/2013 19/05/2014	UFORM99902013 INEUFORM19562 P14 Cuadrante	16/07/2014	Personal	INEUFORM19562 06/2014 Oficial vocal	30/05/2014	Personal					04/03/2014		SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	-	1) Desconozco el recibo, no recibí el dinero y no es mi firma; 2) No recibí ninguna actividad para el partido; 3) No recibí dinero; 4) No he levantado ninguna denuncia; 5) Desconozco el recibo, no recibí dinero, no es mi firma.
UFORM99902013 INEUFORM19562 P14 Cuadrante	04/12/2013 19/05/2014	UFORM99902013 INEUFORM19562 P14 Cuadrante	16/07/2014	Personal	INEUFORM19562 06/2014 Oficial vocal	25/05/2014	Personal					04/03/2014		SI	SI	SI	-	-	-	-	No recibí	-	1) Desconozco el recibo que se me recabó y aclaro que no recibí dinero alguno y mi firma no corresponde; 2) No recibí ninguna actividad para el partido; 3) No recibí pago alguno; 4) No he levantado denuncia alguna; 5) Desconozco el recibo; no recibí ningún dinero y mi firma no es la mía.

Ref	Entidad	Ciudadano	Beneficiario/ Cobrador	N° de cheques	Monto Involucrado	Domicilio	Número de oficio	Fecha de Notificación	Tipo de Notificación	Observaciones	Estatus	Fecha de Respuesta	Sentido de la Respuesta
1	Baja California	C. Vicente Montenegro Lara	Beneficiario	1	\$63,532.00	Av. de la Papaya número 3244, Colonia Residencial Los Laureles, C.P. 21399, Mexicali, Baja California	INE/UTF/DRN/41 70/2016						
2	Baja California	C. Pablo Armenta Castro	Cobrador	N/A	N/A	C. G número 763, Colonia Segunda Sección, C.P. 21100, Mexicali, Baja California	INE/UTF/DRN/41 71/2016				Atendido	23/03/2016	Que confirma la recepción del cheque mediante endoso, precisando que fue exclusivamente para su cobro, porque él se encontraba en las oficinas del CEM del PRD y se lo pidió como favor el C. Vicente Montenegro, que le entregó los recursos a éste quien era Representante Electoral en el 2do Distrito, que llene conocimiento que el dinero fue utilizado para pagar los servicios de los representantes de casilla en dicho distrito, que él no era el encargado de pagar a los representantes de casillas y representantes generales sin embargo sabe que el C. Vicente sí tenía ese cargo y es éste quien sabe quien se quedó con los comprobantes de los pagos efectuados, fue miembro del PRD hasta el 01 de enero de 2015.
3	Baja California	C. Luis Alberto Castro Niño	Ambos	1	\$32,000.00	C.18 de Marzo manzana 36, lote 5 Colonia Maclovio Rojas, C.P. 22254, Tijuana, Baja California.	INE/UTF/DRN/41 72/2016						Que no recibió cheque alguno del Partido de la Revolución Democrática, que desconoce el destino de los recursos, que es militante del partido, que esos recursos se comprueban por el Instituto político y los encargados del manejo.

Ref	Entidad	Ciudadano	Beneficiario/ Cobrador	N° de cheques	Monto Involucrado	Domicilio	Número de oficio	Fecha de Notificación	Tipo de Notificación	Observaciones	Estatus	Fecha de Respuesta	Sentido de la Respuesta
4	Baja California	C. Carlos Rafael Tapia Rolon	Ambos	1	\$25,900.00	Av. Grand Lago Bajlash número 483, Fracc. Jardines del Lago, C.P. 21330, Mexicali, Baja California.	INE/UTF/DRN/41 73/2016						En 2011 recibí nombramiento como Consejero Electoral para la elección interna de Consejeros Nacionales y Estatales para BC y en 2012 recibí nombramiento como enlace del CEN del PRD para el pago de compensaciones en dinero para los militantes que fueron representantes e casillas, en ese sentido no tiene a la mano el oficio mediante el cual entregó la documentación comprobatoria, pero que el dinero lo entregó a los interesados, que no conoce a Pablo Armenta ningún cheque, que no conoce a Pablo Armenta Castro, que si hubo dinero extra al que se le entregó y comprobó, no pasó por sus manos y la documentación la entregó a la encargada de finanzas
	Campeche	C. William Manuel Mena Flores	Beneficiario	12	\$120,000.00	C.14 número 36, Colonia Barrio San Francisco, C.P. 24010, Campeche, Campeche.	INE/UTF/DRN/58 58/2016	29/03/2016	personal		Atendido	06/04/2016	Confirma y ratifica haber recibido y endosado los cheques, únicamente pasar cobrados y utilizar el recurso para dispersarlo en trabajos inherentes al PRD que los expedientes de esos cheques son de la cuenta que les fiscaliza el CEN y que ellos remiten su comprobación de las participaciones que tienen de prerrogativas nacionales, es militante del PRD, de 2011-2014 fue Secretario de Finanzas del CDE y desde octubre de 2014 Presidente de dicho Comité.

Ref	Entidad	Ciudadano	Beneficiario/ Cobrador	N° de cheques	Monto Involucrado	Domicilio	Número de oficio	Fecha de Notificación	Tipo de Notificación	Observaciones	Estatus	Fecha de Respuesta	Sentido de la Respuesta
6	Campeche	C. Rosa Alta Ake Flores	Beneficiario	3	\$30,000.00	C. Mz. 11, lote 42, Colonia Inf Linda Vista Localidad San INE/UTF/DRN/56 Francisco de 59/2016 Campeche, C.P. 24096, Campeche, Campeche.		29/03/2016	personal		Atendido	06/04/2016	Confirma y ratifica haber recibido y endosado los cheques, únicamente pasar cobrados y utilizados para trabajos políticos del PRD, entregaron los recursos a la Secretaría de Finanzas del CDE, es militante del PRD y es empleada del PRD desde el año 1997.
7	Campeche	C. María del Carmen Pérez López	Beneficiario	3	\$30,000.00	No se localizó el domicilio de la Ciudadana							
8	Campeche	C. Maribel Centurión Vázquez	Cobrador	N/A	N/A	C. 19 número 28, Colonia Lerma, C.P. 24500, Campeche, Campeche.	INE/UTF/DRN/56 60/2016	28/03/2016	personal		Atendido	06/04/2016	Confirma y ratifica haber recibido en endoso los cheques, con el objeto de cobrarlos, entregó los recursos a su Jefe inmediato el C. William Manuel Mena Flores, es militante del PRD y es empleada en el área administrativa del CDE PRD desde el año 2000.
9	Campeche	C. Hugo Renán Panti Puc	Cobrador	N/A	N/A	C. Independencia número 81, Colonia Morelos I, C.P. 24036, Campeche, Campeche.	INE/UTF/DRN/56 61/2016	29/03/2016	Con un tercero	Su hermano, Carlos Fernando Panti Puc	Atendido	06/04/2016	Confirma y ratifica haber recibido en endoso los cheques, con el objeto de cobrarlos, entregó los recursos a su Jefe inmediato el C. William Manuel Mena Flores, es militante del PRD y fue empleado del CDE PRD durante el periodo de 2011-2014
10	Chihuahua	C. Lorena Rosario Juárez Villareal	Beneficiario	6	\$284,000.00	C. Lorenzo Parra número 1524, Colonia José María Ponce de León, C.P. 31136, Chihuahua, Chihuahua.	INE/UTF/DRN/11 287/2016						

Ref	Entidad	Ciudadano	Beneficiario/ Cobrador	N° de cheques	Monto Involucrado	Domicilio	Número de oficio	Fecha de Notificación	Tipo de Notificación	Observaciones	Estatus	Fecha de Respuesta	Sentido de la Respuesta
11	Chihuahua	C. Rebeco Aguirre	Ambos	1	\$60,000.00	No se localizó el domicilio del Ciudadano							
12	Chihuahua	C. César Gutiérrez	Cobrador	N/A	N/A	C. Sierra del Comanche número 1234, Colonia Sierra Azul, C.P. 31384, Chihuahua, Chihuahua.	INE/UTF/DRN/11/268/2016						
13	Chihuahua	C. Diego E. Pérez piñón	Cobrador	N/A	N/A	C. Del cisne número 1833, Colonia Colinas del Sol, C.P. 31110, Chihuahua, Chihuahua.	INE/UTF/DRN/11/269/2016						
14	Jalisco	C. Sergio Eloy De La Torre Mata	Ambos	1	\$84,000.00	C. Manuel Ávila Camacho número 8, Colonia Centro, C.P. 46470, Magdalena, Jalisco.	INE/UTF/DRN/11/271/2016				Atendido	23/05/2016	Confirma haber recibido y cobrado el cheque, que el recurso le fue entregado para desarrollar trabajos para la promoción del voto en el Distrito 01 del estado, es militante del PRD y no labora ni ha laborado para PRD, PT o MC.
15	Jalisco	C. Gabriel Enrique Méndez López	Beneficiario	1	\$23,100.00	C. Isla Tasmania número 2022, Colonia Residencial Jardines del Sur, C.P. 44950 Guadalajara, Jalisco.	INE/UTF/DRN/11/272/2016						

Ref	Entidad	Ciudadano	Beneficiario/ Cobrador	N° de cheques	Monto Involucrado	Domicilio	Número de oficio	Fecha de Notificación	Tipo de Notificación	Observaciones	Estatus	Fecha de Respuesta	Sentido de la Respuesta
16	Jalisco	C. Víctor Manuel Pérez Calvillo	Cobrador	N/A	N/A	C. Gómez Farías número 36, Colonia San Juan de Dios, C.P. 44360, Guadalajara, Jalisco.	INE/UTF/DRN/11 273/2016				Atendido	23/05/2017	Confirma haber recibido mediante endoso los 3 cheques, y una vez cobrados reintegro los recursos a los beneficiarios (Gabriel Enrique Méndez, Eduardo Yañez y Linda González), que tiene conocimiento que los recursos fueron entregados para desarrollar trabajos para la promoción del voto en los distritos 02 (Gabriel), 03 (Eduardo) y 16 (Linda) en el estado, es militante y laboro en el CDE del PRD de 2009 a
17	Jalisco	C. Eduardo Desiderio Yañez Torres	Beneficiario	1	\$15,400.00	C. Francisco I. Madero número 404, Colonia Centro, C.P. 47590, San Diego de Alejandría, Jalisco.	INE/UTF/DRN/11 274/2016						
18	Jalisco	C. José Antonio Macías González	Beneficiario	1	\$30,100.00	No se localizó el domicilio del Ciudadano							
19	Jalisco	C. Juan Carlos Dorantes Ramos	Ambos	1	\$18,900.00	No se localizó el domicilio del Ciudadano							
20	Jalisco	C. Miguel Ángel Herrera Guzmán	Ambos	1	\$17,500.00	C. Medrano número 2381, Colonia San Antonio, C.P. 44800, Guadalajara, Jalisco.	INE/UTF/DRN/11 275/2016				Atendido	23/05/2017	Confirma haber recibido y cobrado los cheques, y por lo que hace al endoso de José Antonio Macías, una vez cobrado el dinero le fue entregado a éste, que el recurso le fue entregado para realizar desarrollar trabajos para la promoción del voto en los distritos 06 y 04 (cheque de José Marías) del estado, es militante del PRD y laboro para el CDE del PRD de mayo de 2012 a julio de 2013.

Ref	Entidad	Ciudadano	Beneficiario/ Cobrador	N° de cheques	Monto Involucrado	Domicilio	Número de oficio	Fecha de Notificación	Tipo de Notificación	Observaciones	Estatus	Fecha de Respuesta	Sentido de la Respuesta
21	Jalisco	C. Miguel Arguiano Martín	Ambos	1	\$19,600.00	C. Tikal número 14, Colonia Rey Xolotl, C.P. 45419, Tonalá, Jalisco.	INE/UTF/DRN/11 276/2016				Atendido	13/05/2016	Confirma haber recibido el cheque por parte del PRD, esto con el fin de cambiarlo ya que el dinero sería enviado para fines de campaña al PRD Municipal de Tonalá, que no cuenta con ninguna documentación ya que hizo entrega íntegra de los recursos al entonces candidato a Regidor Neysser Francisco Gutierrez Elenes, que no es militante del partido, que su amigo y candidato le pidió que recogiera una dinero en el PRD Estatal para fines de campaña.
22	Jalisco	C. Alonso Eduardo Jiménez Vargas	Ambos	1	\$30,100.00	C. Mariano Barcenas número 730 interior 42 Colonia Zona Centro, C.P. 44200, Guadalajara, Jalisco.	INE/UTF/DRN/11 277/2016				Atendido	17/05/2016	Confirma haber recibido y cobrado, el recurso le fue entregado para desarrollar trabajos para la promoción del voto en el Distrito 08 del estado, es militante y no labora ni ha laborado para PRD, MC o PT.
23	Jalisco	C. Jorge Arturo Villa Hernández	Ambos	1	\$31,500.00	C. José Rosas número 35, Colonia La Mezquitera, C.P. 44985, San Tlaquepaque, Jalisco.	INE/UTF/DRN/11 278/2016						
24	Jalisco	C. Christian Carrillo Santana	Ambos	1	\$15,400.00	C. Canopus número 5719, Colonia Arboleadas, C.P. 45070, Zapopan, Jalisco.	INE/UTF/DRN/11 279/2016				Atendido	17/05/2016	Confirma haber recibido y cobrado el cheque, cuyo recurso le fue entregado para desarrollar trabajos para la promoción del voto en el Distrito 10 del estado, es militante del PRD y labora para el CDE del PRD desde junio de 2012.

Ref	Entidad	Ciudadano	Beneficiario/ Cobrador	N° de cheques	Monto Involucrado	Domicilio	Número de oficio	Fecha de Notificación	Tipo de Notificación	Observaciones	Estatus	Fecha de Respuesta	Sentido de la Respuesta
25	Jalisco	C. Adrián Salvador González Camarena	Ambos	1	\$28,000.00	C. Canción número 1405, Colonia Fracc. Guadalajara Oriente, C.P. 44700, Guadalajara, Jalisco.	INE/UTF/DRN/11 280/2016				Atendido	17/05/2016	Confirma haber recibido y cobrado el cheque, cuyo recurso fue entregado para desarrollar trabajos para la promoción del voto en el Distrito 11 del estado, es militante del PRD y no labora ni ha laborado para PRD, PT o MC.
26	Jalisco	C. Osiel Sánchez Moya	Ambos	1	\$60,900.00	C. Rinconada de los Tulpanes número 50, Colonia Fracc. Rinconada del Valle C.P. 45850, Tlajomulco de Zuhua, Jalisco.	INE/UTF/DRN/11 281/2016						
27	Jalisco	C. Gustavo Tonatiuh Ledezma Caldera	Ambos	1	\$30,800.00	C. Independencia número 39, Colonia Centro, C.P. 46440, Hoschtapaquillo, Jalisco.	INE/UTF/DRN/11 282/2016				Atendido	23/05/2016	Confirma haber recibido y cobrado, el recurso le fue entregado para desarrollar trabajos para la promoción del voto en el Distrito 13 del estado, es militante y no labora ni ha laborado para PRD, MC o PT.
28	Jalisco	C. José Avalos Camacho	Ambos	1	\$25,200.00	C. Pedro Simón Laplace número 6023, Colonia Paseos del Sol, C.P. 45079, Zapopan, Jalisco.	INE/UTF/DRN/11 283/2016						

Ref	Entidad	Ciudadano	Beneficiario/ Cobrador	N° de cheques	Monto Involucrado	Domicilio	Número de oficio	Fecha de Notificación	Tipo de Notificación	Observaciones	Estatus	Fecha de Respuesta	Sentido de la Respuesta
29	Jalisco	C. Salvador Hernández	V/cente Ambos	1	\$17,500.00	C. Morelos número 48, Colonia Centro, C.P. 47930, Ayotlán, Jalisco.	INE/UTF/DRN/11 284/2016				Atendido	16/05/2016	Que recuerda haber recibido el cheque en las oficinas estatales del PRD en su función de coordinador de campaña del Diputado Local por el Distrito XV que fueron utilizados para el apoyo a los promotores del voto en favor del PRD en dicho distrito. es decir particulares promotores de voto y que como en otros gastos seguramente fue entregado al CDE del PRD una relación de quienes recibieron el recurso y/o recibos personalizados que justifican dicha entrega, al menos que el PRD no lo hubiere previsto el requerir la entrega de dicha documentación.
30	Jalisco	C. Linda Teodora González Rodríguez	Beneficiario	1	\$32,200.00	Priv. Del Campesino número 86, Colonia las Juntas, Localidad Tiaquepaque, C.P. 45590, San Pedro Tiaquepaque, Jalisco.	INE/UTF/DRN/11 285/2016						Confirma y rectifica que no recibió el cheque, respecto del cheque endosado que fue expedido por el PRD éste, a través de sus órganos de gobierno específicamente de la persona que se menciona como "Cobrador" le solicitó que le regresará debidamente endosado el cheque a él personalmente, señalando que por error del partido salió a su nombre, por lo que lo endosó, que no conoce el concepto por el cual fue expedido el cheque pero que si fue emitido en forma de compensación o pago de servicios por sus actividades como "Coordinadora de Campaña del Candidato" que le sea devuelto, no es militante ni simpatizante, ni labora en el instituto político.

Ref	Entidad	Ciudadano	Beneficiario/ Cobrador	N° de cheques	Monto Involucrado	Domicilio	Número de oficio	Fecha de Notificación	Tipo de Notificación	Observaciones	Estatus	Fecha de Respuesta	Sentido de la Respuesta
31	Jalisco	C. Bernabe Arias Macías	Beneficiario	1	\$17,500.00	Av. Mariano Otero 911, Col. Fresno, C.P. 44909, Guadalajara Jalisco	INE/JAL/ILE/VSQ 015/2017						
32	Jalisco	C. Luis Gerardo Duran Moreno	Cobrador	N/A	N/A	C. Barlovento número 2412, Colonia Fresno, Bosques de Victoria, C.P. 44540, Guadalajara, Jalisco.	INE/UTF/DRN/11 286/2016				Atendido	17/05/2016	Confirma haber recibido mediante endoso y cobrado el cheque, que el recurso fue reintegrado al C. Bernabe Arias, que tiene conocimiento de que el recurso fue entregado a éste para desarrollar trabajos para la promoción del voto en el Distrito 17 del estado, es militante del PRD y es militante del PRD y no labora ni ha laborado para PRD, PT o MC.
33	Jalisco	C. Guillermo Bracamontes Del Toro	Ambos	1	\$16,100.00	C. Pedro Moreno González número 42, Localidad Ciudad Guzmán, C.P. 49000, Zapotlán el Grande, Jalisco.	INE/UTF/DRN/11 287/2016	09/05/2016	personal				

Ref	Entidad	Ciudadano	Beneficiario/ Cobrador	N° de cheques	Monto Involucrado	Domicilio	Número de oficio	Fecha de Notificación	Tipo de Notificación	Observaciones	Estatus	Fecha de Respuesta	Sentido de la Respuesta
34	Jalisco	C. Fernando Álvarez Jiménez	Ambos	1	\$500,000.00	C. San Gabriel número 3131, Colonia Jardines de los Arcos, C.P. 44500, Guadalajara, Jalisco.	INE/UTF/DRN/11 288/2016						
35	Jalisco	C. Omar Maximino Villaseñor David	Ambos	1	\$18,200.00	C. Allende número 21 A Localidad el Limón C.P.48700, El Limón Jalisco.	INE/UTF/DRN/11 289/2016				Atendido	18/05/2016	Que prestó sus servicios en la campaña para el candidato a Diputado Federal del PRD en el distrito XVIII, realizando varias actividades dentro de ellas, como jefe de brigada ya que se presentaban de manera adelantada a preparar todo lo relativo al arribo del candidato al municipio que se les requiriera, no recuerda haber recibido el cheque y menos haberlo cobrado, pero de ser el caso, dichos recursos seguramente fueron utilizados para gastos como gasolina, pago de alimentos, propaganda y apoyo para el personal humano que trabajo en esa campaña, sin embargo dadas las costumbres del lugar donde se encuentra no cuenta con documentación soporte, actualmente es militante del PRD y no ha laborado para los partidos PRD, MC o PT.

Ref	Entidad	Ciudadano	Beneficiario/ Cobrador	N° de cheques	Monto Involucrado	Domicilio	Número de oficio	Fecha de Notificación	Tipo de Notificación	Observaciones	Estatus	Fecha de Respuesta	Sentido de la Respuesta
36	Tabasco	C. Marizela Ocaña Gálvez	Ambos	4	\$1,542,800.00	C. Alatorre Número 79, Colonia Centro, C.P. 86700, Macuspana, Tabasco.	INE/UTF/DRN/11 291/2016	06/05/2016	personal		Atendido	12/05/2016	Confirma haber recibido, endosado y/o cobrado los cheques, que los endosos los realizó para el cobro, que los recursos le fueron entregados para el pago de representantes generales y casillas de los 6 distritos electorales del estado, estos a su vez fueron dispersados a través de los candidatos o sus representantes de finanzas de campaña, para lo cual anexa copia de los recibos respectivos (Elizabeth Hernández \$259,200.00, Tomas Bito \$255,600.00, Lorena Méndez \$261,200.00, Ruben Ligonio \$241,200.00, Marcos Medina \$254,400.00 y Antonio Sansores \$271,200.00) es millante del PRD y fue Secretaria de Administración y Finanzas de septiembre de 2011 a octubre de 2014, haciendo mención que los recursos fueron enviados mediante transferencia del CEN del PRD para sufragar los gastos de campaña de diputados federales (pago a
37	Tabasco	C. Carlos Santiago Santiago	Cobrador	N/A	N/A	C. Mazateupa manzana 33, Lote 10, Fracc. Ciudad Bicentenario, Ranchería Tumbulusthal, C/P 86280, Centro, Tabasco.	INE/UTF/DRN/11 292/2016	09/05/2016	personal		Atendido	25/05/2016	Confirma haber recibido mediante endoso los cheques, por ser personal subordinado de la C. Marizela Ocaña Gálvez, le instruyo unicamente que fuera como favor al Banco a cobrar los cheques y le hizo entrega del dinero, que es millante y laboro en la Secretaria de Finanzas del CDE del PRD como auxiliar administrativo de junio 2005-abril 2015

Entidad	N°	N° DE POLIZA	PERIODO	DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO	CUENTA	BANCO	CHEQUE	IMPORTE	REPAP'S INVOLUCRADOS	FECHA EXPEDICIÓN	BENEFICIARIO	COBRADOR	FECHA DE COBRO	OBSERVACIONES 1	OBSERVACIONES 2
Baja California	1	06722	jun-12	VICENTE MONTENEGRO LARA CH.6722 7138/13	*****8822	HSBC	7176722	\$63,352.00	8833, 8823, 8824, 8825, 8826, 8827, 8828, 8829, 8830, 8831 y 8832	04/07/2012	VICENTE MONTENEGRO LARA	PABLO ARMENTA CASTRO	04/07/2012		Confirmados: N/A No localizados: 8823, 8825, 8826, 8830, 8831, 8832 No confirmados: 8833, 8824, 8827, 8828, 8829.
		DA0003	dic-12	DA RECLASIFICACIÓN ANEXO 1 OFICIO 7138/13	*****8822	HSBC	7176723	\$25,900.00	8758, 8752, 8751, 8757, 8759,	04/07/2012	CARLOS RAFAEL TAPIA ROLON	CARLOS RAFAEL TAPIA ROLON	04/07/2012		Confirmados: N/A No localizados: 8758, 8752, 8759 No confirmados: 8751, 8757
	2	RE0013	dic-12	REC. PE. 6723 CARLOS RAFAEL TAPIA ROLON											
		06723	jun-12	CARLOS RAFAEL TAPIA ROLON CH.6723 7138/13											
		DA0004	dic-12	DA RECLASIFICACIÓN ANEXO 1 OFICIO 7138/13											
	3	RE0014	dic-12	REC. PE. 6725/07/12 LUIS A CASTRO NIÑO	*****8822	HSBC	7176725	\$32,000.00	8763, 8761, 8766, 8767, 8764 y 8762	04/07/2012	LUIS ALBERTO CASTRO NIÑO	LUIS ALBERTO CASTRO NIÑO	04/07/2012		Confirmados: 8767 No localizados: 8766, 8764 No confirmados: 8763, 8761, 8762
		06725	jun-12	LUIS ALBERTO CASTRO NIÑO CH.6725											
		DA0001	dic-12	DA RECLASIFICACIÓN ANEXO 1 OFICIO 7138/13	*****0908	HSBC	9717733	\$10,000.00	7856, 7859, 7861, 7863, 7864, 7865, 7869, 7870, 7871, 7872, 7873, 7875, 7876, 7877, 7878	12/06/2015	WILLIAM MANUEL MENA FLORES	MARIBEL CENTURION VAZQUEZ	18/06/2012	Confirmados: 7856, 7861, 7863, 7864, 7865, 7869, 7870, 7876, 7878 No localizados: 7871, 7872, 7873, 7875, 7877 No confirmados: 7859	
			9717734	\$10,000.00			18/06/2015	WILLIAM MANUEL MENA FLORES		MARIBEL CENTURION VAZQUEZ	18/06/2012				
			9717738	\$10,000.00			18/06/2015	WILLIAM MANUEL MENA FLORES		MARIBEL CENTURION VAZQUEZ	18/06/2012				
1	RE0001	dic-12	REC. PD. 205/12 WILLIAM MANUEL MEN F	19/06/2015			WILLIAM MANUEL MENA FLORES	MARIBEL CENTURION VAZQUEZ		19/06/2012					
	000002	may-12	REG.DE P.G.O. POR REPAP				9717744	\$10,000.00	19/06/2015	WILLIAM MANUEL MENA FLORES	HUGO RENAN PANTIPUC	19/06/2012			
							9717746	\$10,000.00	19/06/2015						
							9717759	\$10,000.00	22/06/2015						
							9717768	\$10,000.00	22/06/2015						
							9717769	\$10,000.00	19/07/2015						
2		DA0003	dic-12	DA RECLASIFICACIÓN ANEXO 1 OFICIO 7138/13	*****0908	HSBC	9717736	\$10,000.00	7879, 7880, 7881, 7885, 7887	18/06/2012	ROSA AIDA AKE FLORES	MARIBEL CENTURION VAZQUEZ	18/06/2012		Confirmados: 7880 No localizados: 7881, 7885 No confirmados: 7879, 7887
		RE0003	dic-12	REC. PE. 00004/05/12 MARIA DEL CARMEN PEREZ											
		000002	may-12	REG.DE P.G.O. POR REPAP											

Entidad	N°	N° DE POLIZA	PERIODO	DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO	CUENTA	BANCO	CHEQUE	IMPORTE	REPAP'S INVOLUCRADOS	FECHA EXPEDICIÓN	BENEFICIARIO	COBRADOR	FECHA DE COBRO	OBSERVACIONES 1	OBSERVACIONES 2	
CAMPECHE		017739	jun-12	ROSA AIDA AKE FLORES CH- 17739			9717739	\$10,000.00		18/06/2012	ROSA AIDA AKE FLORES	MARIBEL CENTURIÓN VAZQUEZ	18/06/2012			
		017742	jun-12	ROSA AIDA AKE FLORES CH- 17742			9717742	\$10,000.00		19/06/2012	ROSA AIDA AKE FLORES					
		DA0002	dic-12	DA RECLASIFICACIÓN ANEXO 1 OFICIO 7138/13												
		RE0002	dic-12	REC. PE. 000003/05/12 ROSA AIDA AKE FLORES												
	3	000004	may-12	REG.DE PGO. POR REPAP	*****0908	HSBC			7889, 7891, 7892, 7893, 7894,						Confirmados: 7889, 7891, 7892, 7893 7893 No localizados: N/A No confirmados: 7894	
		017735	jun-12	MARIA DEL C. PEREZ LOPEZ CH- 17735			9717735	\$10,000.00		18/06/2012	MARIA DEL CARMEN PEREZ LOPEZ	MARIBEL CENTURIÓN VAZQUEZ	18/06/2012			
		017737	jun-12	MARIA DEL CARMEN PEREZ LOPEZ CH- 17737			9717737	\$10,000.00		18/06/2012		MARIBEL CENTURIÓN VAZQUEZ	18/06/2012			
		017741	jun-12	MARIA DEL C. PEREZ LOPEZ CH- 17741			9717741	\$10,000.00		19/06/2012		MARIBEL CENTURIÓN VAZQUEZ	19/06/2012			
		DA0004	dic-12	DA RECLASIFICACIÓN ANEXO 1 OFICIO 7138/13			9717766	\$10,000.00		20/06/2012			MARIBEL CENTURIÓN VAZQUEZ	19/06/2012		
	4	RE0004	dic-12	REC. PD. 000005/05/12 WILLIAM MANUEL MENA FLORES	*****0908	HSBC	9717761	\$10,000.00	7895, 7897, 7898, 7899, 7900	13/06/2012	WILLIAM MANUEL MENA FLORES	WILLIAM MANUEL MENA FLORES	13/06/2012		Confirmados: 7897, 7900 No localizados: 7895, 7899 No confirmados: 7896	
	000005	may-12	REG.DE PGO. POR REPAP			9717772	\$10,000.00		30/06/2012			MARIBEL CENTURIÓN VAZQUEZ	30/06/2012			
CHIHUAHUA	1	DA0003	dic-12	DA RECLASIFICACIÓN ANEXO 1 OFICIO 7138/13												
		0000003	jun-12	RECL. CHEQUES # 20063, 73, 76, 77, 78, 79 y 80												
		000001	jun-12	REG. COMP. CHEQUES 20063, 73, 76, 77, 78, 79, 80												
		020080	jun-12	LORENA JUÁREZ VILLARREAL	*****1039	HSBC	9720080	\$50,000.00	6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210 6211, 6212, 6213, 6214, 6215, 6216, 6217, 6218, 6219, 6220, 6221, 6222, 6223, 6224, 6225, 6226, 6227, 6228, 6229, 6230, 6231, 6232, 6233, 6234, 6235, 6236, 6237, 6238, 6239, 6240, 6241, 6242, 6243, 6244, 6245, 6246, 6247, 6248, 6249, 6250, 6251, 6252, 6253, 6254,	11/07/2012	LORENA ROSARIO JUÁREZ VILLARREAL	CÉSAR GUTIÉRREZ	27/07/2012		Confirmados: 6201, 6202, 6204, 6205, 6207, 6208, 6220, 6221, 6223, 6224, 6225, 6226, 6227, 6228, 6229, 6230, 6231, 6232, 6233, 6234, 6235, 6252, 6253, 6254 No localizados: 6203, 6206, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6215, 6216, 6217, 6218, 6219, 6222, 6230, 6232, 6233, 6235, 6236, 6238, 6241, 6243, 6245, 6251, 6252, 6253, 6254	
		020079	jun-12	LORENA JUÁREZ VILLARREAL			9720079	\$50,000.00		11/07/2012	LORENA ROSARIO JUÁREZ VILLARREAL	CÉSAR GUTIÉRREZ	27/07/2012			
		020078	jun-12	LORENA JUÁREZ VILLARREAL			9720078	\$50,000.00		11/07/2012	LORENA ROSARIO JUÁREZ VILLARREAL	CÉSAR GUTIÉRREZ	27/07/2012			

Entidad	N°	N° DE POLIZA	PERIODO	DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO	CUENTA	BANCO	CHEQUE	IMPORTE	REPAP'S INVOLUCRADOS	FECHA EXPEDICIÓN	BENEFICIARIO	COBRADOR	FECHA DE COBRO	OBSERVACIONES 1	OBSERVACIONES 2
		020077	jun-12	LORENA JUÁREZ VILLARREAL			9720077	\$50,000.00	6255, 6256, 6257, 6777	11/07/2012	LORENA ROSARIO JUÁREZ VILLARREAL	CÉSAR GUTIÉRREZ	27/07/2012		No confirmados: 6247, 6248, 6249 No confirmados: 6227, 6228, 6231, 6237, 6239, 6240, 6250, 6256.
		020076	jun-12	LORENA JUÁREZ VILLARREAL			9720076	\$7,000.00		11/07/2012	LORENA ROSARIO JUÁREZ VILLARREAL	CÉSAR GUTIÉRREZ	28/06/2012		
		020073	jun-12	REBECO AGUIRRE			9720073	\$60,000.00		29/06/2012	REBECO AGUIRRE	REBECO AGUIRRE	02/07/2012	Deposito a la cuenta de Mariana Aguilera 4053752101	
		020063	jun-12	LORENA JUÁREZ VILLARREAL			9720063	\$77,000.00		25/06/2012	LORENA ROSARIO JUÁREZ VILLARREAL	DIEGO E. PÉREZ PIÑÓN	25/06/2012		
		DA001	dic-12	RECLASIFICACIÓN OFICIO 7130/13											
1		AJ0001	jun-12	AJUSTE PE-334/06-12					0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0351, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364	23/06/2012	SERGIO ELOY DE LA TORRE MATA	SERGIO ELOY DE LA TORRE MATA	25/06/2012		Confirmados: N/A No localizados: 0353, 0351 No confirmados: 0352, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364
		000333	jun-12	REG.DE PGO. POR REPAP	*****1443	HSBC	9720333	\$84,000.00							
		AJ0002	jun-12	AJUSTE PE-334/06-12											
2		000334	jun-12	365-367 PAGO RECIBOS REPAP COA	*****1443	HSBC	01041053 9720334	\$23,100.00	0365, 0366, 0367	23/06/2012	GABRIEL ENRIQUE MÉNDEZ LOPEZ	VÍCTOR MANUEL PÁEZ CALVILLO	27/06/2012		Confirmados: N/A No localizados: N/A No confirmados: 0365, 0366, 0367
		AJ0003	jun-12	AJUSTE PE-334/06-12											
3		000335	jun-12	368-369 PAGO RECIBOS REPAP COA	*****1443	HSBC	9720335	\$15,400.00	0368 y 0369	23/06/2012	EDUARDO DESIDERIO YÁÑEZ TORRES	VÍCTOR MANUEL PÁEZ CALVILLO	27/06/2012		Confirmados: N/A No localizados: N/A No confirmados: 0368, 0369
		AJ0004	jun-12	AJUSTE PE-336/06-12											
4		000336	jun-12	370-374 PAGO RECIBOS REPAP COA	*****1443	HSBC	9720336	\$30,100.00	0370, 0371, 0372, 0373, 0374	23/06/2012	JOSE ANTONIO MACÍAS GONZÁLEZ	MIGUEL ÁNGEL HERRERA GUZMÁN	27/06/2012	ENDOSO EN PROPIEDAD	Confirmados: N/A No localizados: N/A No confirmados: 0370, 0371, 0372, 0373, 0374
		AJ0005	jun-12	AJUSTE PE-337/06-12											
5		000337	jun-12	375-377 PAGO RECIBOS REPAP COA	*****1443	HSBC	9720337	\$18,900.00	0375, 0376, 0377	23/06/2012	JUAN CARLOS DORANTES RAMOS	JUAN CARLOS DORANTES RAMOS	28/06/2012	DEPOSITO EN CUENTA BANCARIA 6282453232	Confirmados: N/A No localizados: N/A No confirmados: 0375, 0376, 0377

Entidad	N°	N° DE POLIZA	PERIODO	DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO	CUENTA	BANCO	CHEQUE	IMPORTE	REPAP'S INVOLUCRADOS	FECHA EXPEDICIÓN	BENEFICIARIO	COBRADOR	FECHA DE COBRO	OBSERVACIONES 1	OBSERVACIONES 2
JALISCO	6	AJ0006	jun-12	AJUSTE PE-338/06-12											0377
		000338	jun-12	378-379 PAGO RECIBOS REPAP COA	*****1443	HSBC	9720338	\$17,500.00	0378, 0379	23/06/2012	MIGUEL ANGEL HERRERA GUZMAN	MIGUEL ANGEL HERRERA GUZMAN	23/06/2012	SIN SELLO DE PAGADO	Confirmados : N/A No localizados: 0378 No confirmados: 0379
		AJ0007	jun-12	AJUSTE PE-339/06-12											
	7	000339	jun-12	380-383 PAGO RECIBOS REPAP COA	*****1443	HSBC	9720339	\$19,600.00	0380, 0381, 0383,	23/06/2012	MIGUEL ANGUIANO MARTIN	MIGUEL ANGUIANO MARTIN	25/06/2012		Confirmados : 0383 No localizados: 0381 No confirmados: 0380
		AJ0008	jun-12	AJUSTE PE-340/06-12											
	8	000340	jun-12	384-388 PAGO RECIBOS REPAP COA	*****1443	HSBC	9720340	\$30,100.00	0384, 0385, 0386, 0387, 0388	23/06/2012	ALONSO JIMENEZ VARGAS	ALONSO EDUARDO JIMENEZ VARGAS	25/06/2012		Confirmados : N/A No localizados: 0384 No confirmados: 0385, 0386, 0387, 0388
JALISCO	9	AJ0009	jun-12	AJUSTE PE-341/06-12											
		000341	jun-12	389-393 PAGO RECIBOS REPAP COA	*****1443	HSBC	9720341	\$31,500.00	0389, 0390, 0391, 0392, 0393	23/06/2012	JORGE ARTURO VILLA HERNÁNDEZ	JORGE ARTURO VILLA HERNÁNDEZ	23/06/2012	SIN DATOS NI SELLO DE PAGADO	Confirmados : N/A No localizados: 0389 No confirmados: 0390, 0391, 0392
		AJ0010	jun-12	AJUSTE PE-342/06-12											
	10	000342	jun-12	394-395 PAGO RECIBOS REPAP COA	*****1443	HSBC	9720342	\$15,400.00	0394, 0395	23/06/2012	CHRISTIAN CARRILLO SANTANA	CHRISTIAN CARRILLO SANTANA	23/06/2012	SIN SELLO DE PAGADO	Confirmados : N/A No localizados: N/A No confirmados: 0394, 0395
		AJ0011	jun-12	AJUSTE PE-343/06-12											
	11	000343	jun-12	396-399 PAGO RECIBOS REPAP COA	*****1443	HSBC	9720343	\$23,000.00	0396, 0397, 0398, 0399	23/06/2012	ADRIAN SALVADOR GONZÁLEZ CAMARENA	ADRIAN SALVADOR GONZÁLEZ CAMARENA	25/06/2012		Confirmados : N/A No localizados: 0399 No confirmados: 0396, 0397, 0398
		AJ0012	jun-12	AJUSTE PE-344/06-12											

Entidad	N°	N° DE POLIZA	PERIODO	DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO	CUENTA	BANCO	CHEQUE	IMPORTE	REPAP'S INVOLUCRADOS	FECHA EXPEDICIÓN	BENEFICIARIO	COBRADOR	FECHA DE COBRO	OBSERVACIONES 1	OBSERVACIONES 2
	12	000344	Jun-12	400-409 PAGO RECIBOS REPAP COA	*****1443	HSBC	9720344	\$60,900.00	0400, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409	23/06/2012	OSIEL SANCHEZ MOYA	OSIEL SANCHEZ MOYA	23/06/2012	SIN SELLO DE PAGADO	Confirmados: N/A No localizados: 0400, 0402, 0405, 0406, 0409 No confirmados: 0401, 0403, 0404, 0407, 0408
		AJ0013	Jun-12	AJUSTE PE-345/06-12											
	13	000345	Jun-12	410-414 PAGO RECIBOS REPAP COA	*****1443	HSBC	9720345	\$30,800.00	0410, 0411, 0412, 0413, 0414	23/06/2012	GUSTAVO TONATIUH LEDEZMA CALDERA	GUSTAVO TONATIUH LEDEZMA CALDERA	23/06/2012	SIN SELLO DE PAGADO	Confirmados: 0414 No localizados: 0410 No confirmados: 0411, 0412, 0413
		AJ0014	Jun-12	AJUSTE PE-346/06-12											
	14	000346	Jun-12	415-418 PAGO RECIBOS REPAP COA	*****1443	HSBC	9720346	\$25,200.00	0415, 0416, 0417, 0418,	23/06/2012	JOSÉ AVALOS CAMACHO	JOSÉ AVALOS CAMACHO	23/06/2012	SIN SELLO DE PAGADO	Confirmados: 0416 No localizados: 0415, 0418 No confirmados: 0417
		AJ0015	Jun-12	AJUSTE PE-347/06-12											
	15	000347	Jun-12	419-420 PAGO RECIBOS REPAP COA	*****1443	HSBC	9720347	\$17,500.00	0419, 0420	23/06/2012	VICENTE SALVADOR HERNÁNDEZ	VICENTE SALVADOR HERNÁNDEZ	28/06/2012		Confirmados: N/A No localizados: 0420 No confirmados: 0419
		AJ0016	Jun-12	AJUSTE PE-348/06-12											
	16	000348	Jun-12	421-425 PAGO RECIBOS REPAP COA	*****1443	HSBC	9720348	\$32,200.00	0421, 0422, 0423, 0424, 0425	23/06/2012	LINDA TEOCORA GONZALEZ RODRIGUEZ	VICTOR MANUEL PAEZ CALVILLO	23/06/2012	COPIA INCOMPLETA Y SIN SELLO DE PAGADO	Confirmados: N/A No localizados: 0422 No confirmados: 0421, 0423, 0424, 0425
		AJ0017	Jun-12	AJUSTE PE-349/06-12											
	17	000349	Jun-12	426-427 PAGO RECIBOS REPAP COA	*****1443	HSBC	9720349	\$17,500.00	0426, 0427	23/06/2012	BERNABE ARIAS MACÍAS	LUIS GERARDO DURAN D MORENO	28/06/2012		Confirmados: N/A No localizados: N/A No confirmados: 0426, 0427
		AJ0018	Jun-12	AJUSTE PE-350/06-12											

Entidad	N°	N° DE POLIZA	PERIODO	DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO	CUENTA	BANCO	CHEQUE	IMPORTE	REPAP'S INVOLUCRADOS	FECHA EXPEDICIÓN	BENEFICIARIO	COBRADOR	FECHA DE COBRO	OBSERVACIONES 1	OBSERVACIONES 2
		000350	jun-12	428-431 PAGO RECIBOS REPAP COA	*****1443	HSBC	9720350	\$16,200.00	0428, 0429, 0431,	23/06/2012	OMAR MAXIMINO VILLASENOR DAVID	OMAR MAXIMINO VILLASENOR DAVID	25/06/2012	COBRADO EN BANCOMER	Confirmados: N/A No localizados: 0428 No confirmados: 0429, 0431
		AJ0019	jun-12	ALISTE PE-351/06-12											
	19	000351	jun-12	432-433 PAGO RECIBOS REPAP COA	*****1443	HSBC	9720351	\$16,100.00	0432, 0433	23/06/2012	GUILLERMO BRACAMONTES DEL TORO	GUILLERMO BRACAMONTES DEL TORO	27/06/2012		Confirmados: N/A No localizados: N/A No confirmados: 0432, 0433
		000356	jul-12	434-478 y 6351-6399 PAGO RECIBOS REPAP COA					0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 6351, 6352, 6353, 6354, 6355, 6356, 6357, 6358, 6359, 6360, 6361, 6362, 6363, 6364, 6365, 6366, 6367, 6368, 6369, 6370, 6371, 6372, 6373, 6374, 6375, 6376, 6377, 6378, 6379, 6380, 6381, 6382, 6383, 6384, 6385, 6386, 6387, 6388, 6389, 6390, 6391, 6392, 6393, 6394, 6395, 6396, 6397, 6398, 6399	02/07/2012	FERNANDO ALVAREZ JIMENEZ	FERNANDO ALVAREZ JIMENEZ	02/07/2012	SIN SELLO DE PAGADO	Confirmados: 0438, 0441, 0470, 6361, 6363, 6369, 6374, 6380, 6381, 6382, 6383, 6384, 6385, 6386, 6387, 6388, 6389, 6390, 6391, 6392, 6393, 6394, 6395, 6396, 6397, 6398, 6399 No localizados: 0463, 0468, 0472, 0475, 0477, 6351, 6352, 6353, 6357, 6365, 6371, 6375, 6381, 6390, 6392, 6393, 6395, 6397 No confirmados: 0434, 0435, 0436, 0437, 0439, 0440, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0468, 0471, 0473, 0474, 0476, 0478, 6354, 6355, 6356, 6358, 6359, 6360, 6362, 6364, 6366, 6367, 6368, 6370, 6372, 6373, 6376, 6377, 6378, 6379, 6382, 6383, 6384, 6385, 6386, 6387, 6388, 6389, 6391, 6394, 6396, 6398, 6399
		DA0002	dic-12	DA RECLASIFICACIÓN ANEXO 1 OFICIO 7138/13	*****1443	HSBC	9720356	\$500,000.00		02/07/2012	FERNANDO ALVAREZ JIMENEZ	FERNANDO ALVAREZ JIMENEZ	02/07/2012		

Entidad	Nº	Nº DE POLIZA	PERIODO	DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO	CUENTA	BANCO	CHEQUE	IMPORTE	REPAP'S INVOLUCRADOS	FECHA EXPEDICIÓN	BENEFICIARIO	COBRADOR	FECHA DE COBRO	OBSERVACIONES 1	OBSERVACIONES 2
		000010	jun-12	RECL CHEQUE #442, 443, 444, 445 MARICELA OCAÑA GALVE			03481053 9720443	\$3'000,000.00	3118, 3119, 3121, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 375						

Entidad	N°	N° DE POLIZA	PERIODO	DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO	CUENTA	BANCO	CHEQUE	IMPORTE	REPAP'S INVOLUCRADOS	FECHA EXPEDICIÓN	BENEFICIARIO	COBRADOR	FECHA DE COBRO	OBSERVACIONES 1	OBSERVACIONES 2
		000442	jun-12	MARCELA OCAÑA GALVEZ	*****1559	HSBC	9720442	\$200.000,00	3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550	29/06/2012	MARICELA OCAÑA GALVEZ				3254, 3255, 3256, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3270, 3271, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3303, 3305, 3307, 3309, 3312, 3314, 3315, 3316, 3318, 3319, 3323, 3324, 3327, 3330, 3332, 3351, 3359, 3361, 3363, 3365, 3366, 3368, 3373, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3406, 3411, 3414, 3417, 3418, 3435, 3438, 3439, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3451, 3452, 3453, 3455, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3464, 3465, 3466, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3490, 3491, 3492, 3504, 3508, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3532, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo, continúe con el siguiente asunto del orden del día._____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros y representantes, me permito informar a ustedes que mediante oficio de fecha 11 de septiembre del presente, suscrito por el ciudadano Hugo Eric Flores Cervantes, Presidente del Comité Directivo Nacional del Partido Encuentro Social, notifica su designación como representante suplente de ese partido político, es el caso que estando presente procede tomare la protesta de Ley, por lo que ruego a todos ustedes ponerse de pie._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo._____

Ciudadano Hugo Eric Flores Cervantes, representante suplente del Partido Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ¿protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en la Ley General de Partidos Políticos y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado?_

El representante suplente de Encuentro Social, Ciudadano Hugo Eric Flores Cervantes: ¡Sí protesto!_____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Confío que en el desempeño de esta importante encomienda usted se apegará a los principios rectores de la función electoral y con ellos contribuirá al fortalecimiento y consolidación del Sistema Democráticos del país._____

Sea usted de nueva cuenta bienvenido._____

Secretario del Consejo, dé cuenta del siguiente punto del orden del día._____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto es el relativo al Proyecto de Dictamen del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativo a la pérdida de registro del Partido Político Nacional denominado Nueva Alianza, en virtud de no haber obtenido por lo menos el 3 por ciento de la votación válida emitida en la Elección Federal Ordinaria celebrada el 1 de julio de 2018._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo, le pido que presente el punto. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores, Consejeros y representantes, Consejero Presidente si usted no tiene objeción, a fin de no hacer uso otra vez de la palabra en este mismo punto haré referencia al siguiente, si no hay inconveniente. _____

Los asuntos que se ponen a su consideración tienen sustento en lo dispuesto en el artículo 41 Constitucional, donde se establece que le será cancelado el registro al Partido Político Nacional que no obtenga, al menos, el 3 por ciento de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión. _____

Al respecto, la Ley General de Partidos Políticos precisa en su artículo 94, párrafo 1, inciso b), que el porcentaje mínimo mencionado para declarar la pérdida de registro se considerará de la votación válida emitida, obtenida en la Elección Ordinaria inmediata anterior. _____

Es así que luego de celebrada la Jornada Electoral del pasado 1 de Julio y efectuados los cómputos que fueron revisados en distintos juicios de inconformidad y recursos de reconsideración en el Tribunal Electoral, los partidos políticos Nueva Alianza y Encuentro Social, no obtuvieron el 3 por ciento en ninguna de las 3 votaciones celebradas para elegir Diputaciones Federales, Senadurías y Presidencia de la República. _____

Como consecuencia de lo anterior, el pasado 3 de septiembre, la Junta General Ejecutiva en ejercicio de sus atribuciones legales aprobó los Acuerdos por los que se declaró que los partidos políticos mencionados, se ubicaban en los supuestos señalados por la Constitución Política y la Ley como “causales de pérdida de registro” y por tanto, se les dio vista para que alegaran lo que a su derecho conviniese. _____

El 6 de septiembre pasado los partidos políticos ejercieron en tiempo y forma sus derechos de audiencia y ofrecieron las pruebas que consideraron convenientes, entre ellas, documentales privadas, públicas, presuncionales y técnicas, además, de informes y copias, por señalar las más evidentes. _____

Así, una vez analizadas y desahogadas todas las pruebas presentadas, la Junta General Ejecutiva se encontró en aptitud de someter a consideración de este Consejo General, los Proyectos de Dictamen de Pérdida de Registro de los Partidos Políticos Nueva Alianza y Encuentro Social._____

Con esta determinación, estos partidos políticos pierden los derechos y prerrogativas establecidas en la Constitución Política y la Ley General de Partidos Políticos con excepción de las prerrogativas públicas correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018, que deberán ser entregadas por este Instituto al Interventor respectivo._____

Por otra parte, ambos partidos políticos deberán cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización establece la normatividad electoral hasta la conclusión de los procedimientos respectivos, así como con la liquidación de su patrimonio._____

Adicionalmente, se propone instruir al Comité de Radio y Televisión para que emita el Acuerdo por el que se modifique la pauta para el segundo semestre del periodo ordinario 2018, con el objeto de reasignar los tiempos de Estado entre los demás Partidos Políticos Nacionales._____

Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración los Proyectos mencionados._____

Es cuanto, Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario del Consejo._____

Permítanme intervenir en este punto y al igual que el Secretario del Consejo, hacer una reflexión que tiene que ver éste y con el punto siguiente._____

En agosto del año 2014 dimos en esta mesa la bienvenida a 3 nuevos partidos políticos: el Partido Humanista, el Partido Encuentro Social y el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)._____

En esa ocasión, celebramos la decisión de miles de ciudadanas y ciudadanos, que libre y voluntariamente ejercieron sus derechos y le apostaron a la organización partidaria para influir en la vida pública a través de los cauces institucionales dispuestos en nuestras leyes._____

Los partidos políticos son instituciones que juegan un papel central en los sistemas democráticos. Ya lo decía Hans Kelsen, pensar en la democracia sin partidos políticos es el resultado o de la ilusión, o de la mera hipocresía. _____

Los partidos políticos son organizaciones articuladoras de concesos, que permiten en las complejas sociedades modernas, que la pluralidad social esté presente en las instancias de decisión política, a partir del respaldo que cada uno de esos partidos políticos haya obtenido en las urnas. _____

Por eso hemos, aquí en el Consejo General, sostenido reiteradamente que no hay democracia, insisto, sin partidos políticos. _____

Pero, no debe de olvidarse que el respaldo social de cada partido político es dinámico, que depende de sus éxitos en las elecciones, de la elección de sus candidatos, de la capacidad de convencimiento que logren desplegar hacia la ciudadanía con sus campañas, y de su capacidad, también, para encausar las demandas de la sociedad, así como eventualmente para la construcción de alianzas políticas. _____

El dinamismo de ese pluralismo es lo que subyace en la expresión una y otra vez, lo señalo en cada Proceso Electoral, en el sentido de que el poder político no se gana, la disputa por el poder político democrático no se gana todo ni se pierde todo, y menos de una vez y para siempre. _____

De ahí que la fuerza de cada partido político también sea cambiante, y que la diversidad del pluralismo político se modifique inevitablemente de una elección a otra. _____

Esa es una de las virtudes de los sistemas democráticos, que son los ciudadanos, y nadie más que ellos, quienes deciden cuántos partidos políticos quieren en la competencia democrática, y con qué capacidad de representación política los quiere ver en el Congreso. _____

En el Sistema Electoral Mexicano, desde la Reforma de 2007-2008, las puertas para el ingreso de nuevas fuerzas políticas se abren, y lo digo como lo he dicho, en esta mesa y antes desde la Academia, lamentablemente ahora cada 6 años, esas son las reglas del juego hoy vigentes. _____

Pero, la permanencia se evalúa en cada elección, y conforme a esas reglas del juego democrático que se han pactado, y que hacen de la Constitución política un reflejo del acuerdo del consenso político que rija nuestra democracia. _____

Se quedan quienes logran, al menos, el 3 por ciento de la votación en alguna de las elecciones federales, que son objeto de disputa._____

Esa evaluación, lo reitero, la hace la ciudadanía y nadie más que ellos, a través del sufragio; son las y los ciudadanos los que deciden qué partidos políticos se quedan y qué partidos políticos salen de nuestro Sistema Político._____

Fueron las y los ciudadanos, y nadie más que ellos, quienes el 1 de julio decidieron qué partidos debían permanecer en la competencia, y cuáles salir de la misma._____

Esa determinación ciudadana es la que sustenta los Acuerdos que aprobaremos en este punto y en el siguiente del orden del día respecto a la pérdida de registro de los Partidos Nueva Alianza y Encuentro Social; fue el voto de los electores el que determinó que uno de los 3 partidos políticos que ingresaron apenas el 2014 a la competencia democrática, se haya convertido en una fuerza mayoritaria en ambas cámaras del Congreso de la Unión y que 8 de 10 partidos políticos mantuvieran el registro._____

Estoy convencido que una sociedad democrática debe tener múltiples formas de expresarse, canales siempre abiertos para la participación política, así como contar con el andamiaje que garantice en cada elección posibilidades reales para que las minorías se conviertan eventualmente en mayorías si así lo decide el voto ciudadano y que las fuerzas mayoritarias disputen sin dados marcados en condiciones de equidad el respaldo de los electores y con ello los poderes públicos en las urnas._____

Confío en que las y los ciudadanos que no lograron conformar una opción política, al menos para el 3 por ciento del electorado, sigan involucrándose en la vida pública que pugnen por ejercer sus derechos políticos en organizaciones partidarias existentes o bien, en el proceso de conformación de otras, el derecho de asociación previsto por nuestra Constitución Política en materia política, no se restringe a la figura de los propios partidos políticos, sino que es indispensable que se recree a través de los distintos mecanismos de participación legalmente previstos en el reforzamiento de nuestra democracia._____

Al respecto debo señalar que en las próximas semanas este Consejo General dará a conocer los Lineamientos que permitirán a la ciudadanía conformar nuevos partidos políticos para competir en los próximos Procesos Electorales Federales, como ustedes saben, la puerta del Sistema de Partidos Políticos es una puerta abierta para la salida

del mismo, pero también abierta para la entrada a dicho Sistema, el próximo año, quienes consigan el respaldo ciudadano podrán comenzar ese proceso de incorporación al Sistema de Partidos Políticos en México. _____

Me importa enfatizar que ninguna democracia, por incipiente o consolidada que sea, el tamaño de pluralismo es fijo ni definitivo, siempre es una decisión de la sociedad construir los mejores canales para la participación política y es esa misma sociedad la que define quién gana, quién pierde, pero bajo la premisa de que nadie gana todo y nadie pierde todo, insisto en ello, y mucho menos de una vez y para siempre. Las elecciones no son solamente un mecanismo en México, como ocurre en toda democracia para poder integrar los órganos de representación política a través del voto, sino que también el mismo voto constituye una manera de premiar o de castigar la acción de Gobierno, eso es algo que nadie en democracia debe olvidar. _____

El voto expresado en las urnas el 1 de julio es un voto de confianza para quienes acceden a los órganos de representación popular, pero ese voto en 3 años será de nueva cuenta la evaluación del trabajo realizado y eso es algo que los partidos políticos, que las y los Consejeros Electorales, que quienes integramos las autoridades electorales no debemos perder de vista, quienes gobiernan en democracia están sujetos al escrutinio ciudadano y es ese el que decide la recreación de la vida pública. Por ello, estoy convencido que impulsar el pluralismo es también una forma de fortalecer a nuestra democracia. _____

Tiene el uso de la palabra el Maestro Luis Castro Obregón, representante del Partido Nueva Alianza. _____

El C. representante de Partido Nueva Alianza Maestro Luis Castro Obregón:
Gracias, Consejero Presidente. _____

En primer lugar, deseo expresar un reconocimiento público a las Consejeras y Consejeros Electorales del Instituto Nacional Electoral por su reacción oportuna para intentar detener en Chiapas lo que parecía ser un gran operativo para atentar contra la igualdad, contra la participación política de la mujer, su esfuerzo para impedir un caso de violencia política masiva por razón de género, demuestra que las conquistas, los avances logrados en el país son aún inestables, que nuestra democracia no es plena, y que, si se afloja el paso, se retrocede. _____

La sociedad mexicana habló el 1 de julio pasado, al menos aquella parte de la sociedad que tiene acreditada su condición ciudadana, y quiso ejercerla, pudo hacerlo porque el Instituto Nacional Electoral nuevamente desplego sus capacidades al organizar con éxito el Proceso Electoral Federal y Concurrentes._____

Consejero Presidente, Consejeras, Consejeros Electorales, compañeros representantes de los partidos políticos y del Poder Legislativo, defiendan al Instituto Nacional Electoral, eludan las presiones mejor que hasta ahora, si lo hacen con éxito, podrá ser salvaguardada la democracia en tiempos que se requieren._____

El electorado mexicano eligió, sin duda, a Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la República, y aprobó su Proyecto de nación al quitarle el poder de reto a la oposición en el Congreso de la Unión._____

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le quitó voz a las minorías alternativas, a la pluralidad, a la diversidad, a quienes luchamos por la inclusión; no fueron los ciudadanos Consejero Presidente, fue el Tribunal Electoral._____

Las ciudadanas y los ciudadanos al votar convirtieron en simbólica y testimonial la presencia del Congreso de los partidos del siglo pasado, poco acostumbrados a debatir. A nosotros, a Nueva Alianza, nos dio el mandato de buscar la mejor versión de nosotros mismos, de refrendar nuestro origen y principios, de revisar lo actuado, de aprender de los errores y surgir nuevamente más fuertes, más unidos y más comprometidos con las mejores causas de México._____

En Nueva Alianza, hemos sido durante los últimos 12 años actor relevante en la política de nuestro país, ajenos al vaivén del oportunismo, impulsores de iniciativas trascendentes en el Congreso de la Unión, con presencia hoy en día en más de 1 mil cargos de elección popular en los distintos ámbitos Federal, estatal o municipal._____

Nosotros somos quienes reivindicamos desde el aula y con orgullo el derecho fundamental a una educación pública, laica, gratuita, de calidad, como el mejor instrumento contra la ignorancia y los fanatismos, la defensa de la escuela pública de aquellos que piensan que el conocimiento es mercancía y privilegio, y no factor de desarrollo e inclusión._____

Somos los defensores con mayor compromiso, propuestas, discurso y activismo por las causas de las mujeres, de los derechos, de las comunidades de la diversidad sexual, de las oportunidades para los jóvenes, del medio ambiente sostenible, de las libertades y derechos de las y los mexicanos, de la auténtica representación poblacional en la distritación del voto y de la facilitación del voto de nuestros connacionales desde el extranjero, de la protección de datos personales que resguarda el Registro Federal de Electores, tentación de empresas y particulares. _____

Somos los impulsores de la siguiente generación de derechos humanos y de políticas públicas que atiendan las nuevas demandas, derivadas de la economía compartida de la sociedad de la información, de la sociedad de la transparencia que diría “Yun Cheng Han” somos una fuerza social real con presencia y liderazgo en 32 Entidades Federativas con registro Local en 18 estados que serán la plataforma que garantice nuestra participación, incidencia permanente en las decisiones que se tomen de los asuntos públicos. _____

Somos demócratas, reconocemos que las personas no se equivocan al elegir, sino los Gobiernos al actuar y los políticos al repetir “lo estamos viendo”, las prácticas que la sociedad repudia, sin darse cuenta que repetir la historia, sin acordarse de que al repetir la historia se cae en la tragedia o en la farsa. _____

Es momento de ver al futuro y de ser partícipes en la profunda transformación demandada por la ciudadanía en las urnas, nuestros principios e ideales persisten con una vigencia innegable, no se puede entender un país con la voz que cuestiona sustentada en la razón, sin la crítica acompañada de una mejor propuesta, sin el esfuerzo, ideas y convicciones de un millón y medio de mexicanas y mexicanos que nos dieron su voto y que entienden la política como la actividad humana más noble, cuando se hace en beneficio de la sociedad. _____

Hoy parece que cerramos un ciclo para poder abrir otro, no consentimos el acto de autoridad que en esta sesión se materializa, acudiremos al Tribunal Electoral una vez más, a defender nuestro derecho a la asociación política de más de 700 mil ciudadanas, ciudadanos que se identifican con el color y las causas turquesas. _____

Sí, a ese Tribunal Electoral que corrige la decisión de los ciudadanos, que otorgó la representación de un Distrito de mujer, de pueblo originario a Varón Urbano sin candidatura legal y lo vamos hacer, porque no es admisible renunciar a agotar todas las instancias en la defensa de nuestros derechos, y porque creemos que la lucha siempre debe ser por la vía institucional. _____

Algún día quizás el Tribunal Electoral asumirá el rol que la Republica le confiere. _____ Nueva Alianza vive, somos audaces e indómitos, para defender nuestras causas a las que jamás renunciamos, somos leales y comprometidos con las instituciones y con el país, regresaremos para estar en la Boleta en Elección Federal intermedia, y seguir siendo la fuerza liberal que el México del siglo XXI requiere. _____

Nos veremos aquí, estaremos citados en el 2021. _____

Gracias, por su atención. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor representante. _____

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, le voy a pedir que tome la votación correspondiente. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Dictamen del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto 11. _____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. _____

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña), Consejero Presidente. _____

(Texto del Dictamen aprobado INE/CG1301/2018) Ptos. 11 _____

DICTAMEN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RELATIVO A LA PÉRDIDA DE REGISTRO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO NUEVA ALIANZA, EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR LO MENOS EL TRES POR CIENTO DE LA VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA EN LA ELECCIÓN FEDERAL ORDINARIA CELEBRADA EL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO

A N T E C E D E N T E S

- I. **Registro de Nueva Alianza.** El Partido Político Nacional denominado Nueva Alianza (en adelante Nueva Alianza) obtuvo su registro ante el otrora Instituto Federal Electoral el catorce de julio de dos mil cinco, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de mayo de dos mil seis. En tal virtud, el partido político mencionado, al contar con registro vigente ante este Instituto Nacional Electoral (en adelante INE) participó en la preparación, desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral Federal ordinario correspondiente al año dos mil dieciocho, y ejerció su derecho a postular candidaturas a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, senadurías y diputaciones federales por ambos principios conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución) y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante LGIPE).
- II. **Consulta formulada por Encuentro Social.** El once de mayo de dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria, fue aprobado el “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se da respuesta a las consultas formuladas por el Partido Encuentro Social”, identificado como INE/CG452/2018 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de agosto del presente año. Este acuerdo, que no fue impugnado, respondió consultas respecto al porcentaje de votación requerido para mantener el registro de un Partido Político Nacional, sobre la asignación de una diputación federal por el principio de representación proporcional cuya fórmula contendiera simultáneamente por el principio de mayoría relativa y obtenga el triunfo; y respecto al efecto producido por haber alcanzado el tres por ciento de la votación válida emitida durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018.

- III. **Jornada Electoral Federal 2018.** El primero de julio de dos mil dieciocho se celebraron elecciones ordinarias federales para elegir la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, senadurías y diputaciones federales. En ellas participaron los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, MORENA y Encuentro Social. También participaron las coaliciones denominadas: “Por México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano; “Todos por México”, integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza; y “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos del Trabajo, MORENA y Encuentro Social.
- IV. **Segunda consulta formulada por Encuentro Social.** En sesión ordinaria celebrada el dieciocho de julio de dos mil dieciocho, se aprobó el “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se da respuesta a la consulta formulada por el partido denominado Encuentro Social”, identificado con la clave INE/CG651/2018, relativo a la reinterpretación del concepto de votación válida emitida para efectos del artículo 41, Base I, párrafo cuarto de la Constitución, excluyendo de la misma los votos emitidos para candidatos independientes.
- V. **Recurso de apelación promovido por Encuentro Social.** El veintiuno de julio de dos mil dieciocho, Encuentro Social interpuso recurso de apelación, a efecto de controvertir el Acuerdo INE/CG651/2018, mismo que fue resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el tres de agosto del año en curso, confirmando el acto impugnado.
- VI. **Resultados del Proceso Electoral Federal 2017-2018.** El diecinueve de agosto de dos mil dieciocho, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyó la resolución de los medios de impugnación interpuestos por los partidos políticos y las coaliciones respecto a los resultados de las elecciones ordinarias federales para elegir la Presidencia, senadurías y diputaciones, realizadas el primero de julio de dos mil dieciocho.
- VII. Con fechas veintiuno y veintidós de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficios INE/DEOE/1998/2018 e INE/DEOE/2001/2018, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral remitió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos los resultados de las elecciones ordinarias federales para

elegir la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, senadurías y diputaciones federales.

- VIII. El veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, en sesión ordinaria, el Consejo General del INE efectuó el cómputo total, la declaración de validez de la elección y la asignación de senadurías y diputaciones federales por el principio de representación proporcional mediante los Acuerdos INE/CG1180/2018 e INE/CG1181/2018.
- IX. El veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió los recursos de reconsideración interpuestos en contra de los Acuerdos mencionados en el numeral que antecede, y confirmó el contenido de los mismos.
- X. **Declaratoria de pérdida de registro.** El tres de septiembre de dos mil dieciocho, la Junta General Ejecutiva de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/JGE134/2018, mediante el cual se emitió la declaratoria de pérdida de registro de Nueva Alianza al no haber alcanzado el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho. (Anexo1)
- XI. El tres de septiembre del presente año, a las diez horas con veintidós minutos, se notificó a Nueva Alianza la declaratoria referida en el antecedente X, otorgándosele un término de setenta y dos horas para que manifestara lo que a su derecho conviniera.
- XII. El cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, el Lic. Marco Alberto Macías Iglesias, representante suplente de Nueva Alianza ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, solicitó al Presidente de dicho Consejo disponer lo conducente para presentar los alegatos que al derecho de dicho partido convienen de forma oral, señalando el lugar y la autoridad ante la cual se deba comparecer para tales fines.
- XIII. En respuesta a lo anterior, mediante oficio INE/SE/1017/2018 notificado el día cinco de septiembre del presente año, el Secretario Ejecutivo de este Instituto, citó al representante de Nueva Alianza el seis de septiembre a las 10:00 horas, a efecto de conducir su comparecencia oral.

- XIV. El seis de septiembre de dos mil dieciocho, Nueva Alianza desahogó por escrito la vista mencionada y manifestó en forma oral lo que a su derecho convino, según consta en el acta número INE/DS/OE/CIRC/1523/2018 que levantó la Oficialía Electoral de este Instituto.
- XV. El siete de septiembre de dos mil dieciocho, la Junta General Ejecutiva aprobó el presente proyecto de Dictamen a fin de someterlo a consideración de este máximo órgano de dirección.

En virtud de los antecedentes descritos; y

C O N S I D E R A N D O

Atribuciones del Instituto Nacional Electoral

1. En términos de lo preceptuado en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo primero, de la Constitución en relación con los artículos 29, párrafo 1 y 30, párrafo 2 de la LGIPE, el INE es un organismo público autónomo que tiene como función estatal la organización de las elecciones y es autoridad en la materia, cuyas actividades se rigen por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
2. El artículo 34 de la LGIPE, dispone que el Consejo General, la Presidencia del Consejo General, la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva, constituyen los órganos centrales del INE.

Declaratoria de pérdida de registro

3. El artículo 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo de la Constitución, establece que *“El partido político que no obtenga, al menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro”*.
4. En primer término, se estudiará entonces si Nueva Alianza se ubica o no en el supuesto de pérdida de registro a que se refiere el citado artículo 41, Base I,

último párrafo de la Constitución, en relación con el artículo 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la Ley General de Partidos Políticos (en adelante LGPP) y posteriormente se analizarán los argumentos vertidos por dicho instituto político, en el desahogo de la vista que en forma oral desahogó el seis de septiembre del presente año.

el contenido del artículo 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo de la Constitución, establece que le será cancelado el registro al Partido Político Nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión; sin embargo, dicho artículo no establece a qué elección se refiere, si se trata de la elección inmediata anterior, si se trata de una elección ordinaria o extraordinaria, si se refiere a la renovación del Congreso en su totalidad o a la elección para renovar cada una de las cámaras, por tanto, la disposición constitucional en comento no puede ser aplicada en forma aislada y, en consecuencia, debe acudirse a su interpretación sistemática y funcional.

Para ello, es necesario tener presente la LGPP dispuso en el artículo 94, párrafo 1, inciso b) como causal de pérdida de registro de un partido político “no obtener en la **elección ordinaria inmediata anterior**, por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida **en alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos**, tratándose de Partidos Políticos Nacionales”.

De lo anterior, se colige que los elementos necesarios a considerar por la autoridad administrativa para declarar la pérdida de registro, son los siguientes:

- a) Que se trate de una elección ordinaria;
- b) Que sea la elección inmediata anterior;
- c) Que se trate de la elección para diputaciones federales, senadurías o la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos.

En este sentido, la elección inmediata anterior a la resolución sobre la pérdida de registro de Nueva Alianza, es la elección ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho para la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, senadurías y diputaciones federales.

Como se señaló en los antecedentes VI, VIII y IX del presente Dictamen, el diecinueve de agosto de dos mil dieciocho, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyó la resolución de los medios de impugnación interpuestos por los partidos políticos respecto a los resultados de las elecciones ordinarias federales para elegir la Presidencia, senadurías y diputaciones, realizadas el primero de julio de dos mil dieciocho. Posteriormente, el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, en sesión ordinaria, el Consejo General del INE efectuó el cómputo total, la declaración de validez de la elección y la asignación de senadurías y diputaciones federales por el principio de representación proporcional mediante los Acuerdos INE/CG1180/2018 e INE/CG1181/2018. Finalmente, el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió los Recursos de Reconsideración interpuestos en contra de los Acuerdos mencionados, y confirmó el contenido de los mismos y concluyó el Proceso Electoral Federal ordinario.

De ahí que se concluya que los datos relacionados con la votación válida emitida son firmes y definitivos.

5. De acuerdo con la Declaratoria de pérdida de registro del Partido Político Nacional denominado Nueva Alianza, aprobada por la Junta General Ejecutiva de este Instituto el día tres de septiembre de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo INE/JGE134/2018, el referido partido político se ubica en el supuesto establecido por el artículo 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la LGPP, como consta en los cuadros siguientes:

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS		
PARTIDO POLÍTICO Y CANDIDATO INDEPENDIENTE	VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA	PORCENTAJE
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	9,996,514	18.1837
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	7,677,180	13.9648
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA	1,602,715	2.9153
PARTIDO DEL TRABAJO	3,396,805	6.1788
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	1,051,480	1.9126
MOVIMIENTO CIUDADANO	1,010,891	1.8388
NUEVA ALIANZA	561,193	1.0208
MORENA	25,186,577	45.8145
ENCUENTRO SOCIAL	1,530,101	2.7833
JAIME HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERÓN	2,961,732	5.3874
TOTAL	54,975,188	100%

SENADURÍAS DE MAYORÍA RELATIVA

PARTIDO POLÍTICO Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES	VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA	PORCENTAJE
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	9,852,753	18.3127
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	8,961,369	16.6559
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA	2,973,479	5.5266
PARTIDO DEL TRABAJO	2,149,566	3.9953
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	2,514,578	4.6737
MOVIMIENTO CIUDADANO	2,621,317	4.8721
NUEVA ALIANZA	1,299,733	2.4157
MORENA	21,013,123	39.0558
ENCUENTRO SOCIAL	1,311,337	2.4373
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES	1,105,624	2.0549
TOTAL	53,802,879	100

SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

PARTIDO POLÍTICO Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES	VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA	PORCENTAJE
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	9,969,069	18.3599
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	9,011,312	16.5960
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA	2,982,826	5.4934
PARTIDO DEL TRABAJO	2,164,088	3.9856
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	2,527,710	4.6553
MOVIMIENTO CIUDADANO	2,654,085	4.8880
NUEVA ALIANZA	1,306,792	2.4067
MORENA	21,256,238	39.1473
ENCUENTRO SOCIAL	1,320,283	2.4315
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES	1,105,624	2.0362
TOTAL	54,298,027	100

DIPUTACIONES DE MAYORÍA RELATIVA

PARTIDO POLÍTICO Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES	VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA	PORCENTAJE
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	10,033,157	18.6881
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	9,271,950	17.2703
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA	2,959,800	5.5130
PARTIDO DEL TRABAJO	2,201,192	4.1000
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	2,685,677	5.0024
MOVIMIENTO CIUDADANO	2,473,056	4.6064
NUEVA ALIANZA	1,385,421	2.5805
MORENA	20,790,623	38.7254
ENCUENTRO SOCIAL	1,347,540	2.5100
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 1	534,975	0.9965
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 2	3,989	0.0074
TOTAL	53,687,380	100

DIPUTACIONES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL		
PARTIDO POLÍTICO Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES	VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA	PORCENTAJE
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	10,093,012	18.6874
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	9,307,233	17.2325
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA	2,967,452	5.4943
PARTIDO DEL TRABAJO	2,210,988	4.0937
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	2,694,654	4.9892
MOVIMIENTO CIUDADANO	2,484,185	4.5995
NUEVA ALIANZA	1,390,882	2.5752
MORENA	20,968,859	38.8242
ENCUENTRO SOCIAL	1,353,499	2.5060
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 1	534,975	0.9905
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 2	3,989	0.0074
TOTAL	54,009,728	100

6. Ahora bien, el tres de septiembre del presente año, mediante oficio INE/DS/3166/2018, se notificó a Nueva Alianza la declaratoria referida en el considerando anterior de la presente Resolución, dándosele vista para que en un término de setenta y dos horas manifestara lo que a su derecho conviniera.

Por ello, el seis del mismo mes y año, Nueva Alianza desahogó en forma oral y por escrito la vista que le fue otorgada argumentando básicamente lo siguiente:

- a) “La declaratoria de pérdida de registro del Partido Político Nacional denominado Nueva Alianza, emitida mediante Acuerdo INE/JGE134/2018 aprobado por la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral el día tres de septiembre de dos mil dieciocho atenta contra el sistema democrático de nuestro país, el régimen plural de partidos políticos, el derecho de las expresiones políticas minoritarias a participar en los asuntos públicos, así como de su representación debida en los órganos deliberativos de elección popular.
- Al respecto, se advierte que el fundamento de dicha determinación deriva del artículo 41, base primera párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificado mediante la reforma constitucional en materia político electoral del año dos mil catorce, misma que constituye un paso adicional hacia un régimen de partidos políticos cada vez más reducido, en el cual se dificulta tanto la constitución como la subsistencia de las expresiones minoritarias mediante la implementación de diversos procedimientos y reglas (solicitud de conformación cada seis años, incremento de porcentuales, coaliciones

electorales con emblema separado, financiamiento público y de acceso a radio y televisión desigual, etcétera) orientados a desincentivar la representación plural de la sociedad.

Es por ello que como rasgo deseable y característico de una sociedad democrática se debe propiciar un régimen de partidos plural en el que todas las expresiones puedan articularse y ejercer su derecho de asociación política en la forma más acabada de participación, como son los partidos políticos, reconocidos constitucionalmente como entidades de interés público.

Por lo expuesto, resulta innegable que la declaratoria de pérdida de registro de Nueva Alianza emitida por la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral atenta contra el pluralismo político de nuestro país, al restringir el derecho de asociación política a una agrupación que actualmente se conforma por más de setecientos mil ciudadanos afiliados con derechos político electorales vigentes que identificaron en Nueva Alianza la forma de participar en los asuntos de la República y que con dicha determinación, verán limitada dicha posibilidad.”

- b) “(...) se considera que la tesis aislada LIII/2016 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y adoptada por la Junta General Ejecutiva para obtener la votación válida emitida no resulta aplicable al caso concreto, por lo que no debió considerarse la votación a favor de los candidatos independientes dentro de la sumatoria que sirvió como base para arribar a los porcentuales respectivos.

En efecto, el criterio en comento no es de observancia obligatoria al tratarse de un criterio aislado y no de una tesis de jurisprudencia emitida por la máxima autoridad jurisdiccional en la materia; razón por la cual la Junta General Ejecutiva debió considerar que contrario a lo establecido en el mismo en el sentido de que los votos emitidos a favor de las candidaturas independientes deben computarse para efectos de establecer el umbral del 3% para la conservación del registro de un partido político, dicho razonamiento es contrario al sistema de partidos políticos y conlleva un elemento distorsionador.

Al respecto, se advierte que si bien es cierto para los efectos directos del voto en una elección uninominal deben considerarse como votos válidos; para los efectos indirectos del voto constitucionalmente establecidos como lo son justamente la conservación del registro nacional como partido político; la asignación de diputados por el principio de representación proporcional; la obtención de financiamiento público y

prerrogativas como acceso a tiempos oficiales de radio y televisión, la votación emitida a favor de los candidatos independientes, entre otros, no debe ser considerada dicha votación en virtud de que se trata de derechos y prerrogativas a los que los candidatos independientes no pueden acceder una vez concluido el Proceso Electoral correspondiente; razón por la cual su inclusión genera una distorsión indebida que incrementa injustificadamente el total de la votación válida emitida y consecuentemente el número de votos necesarios para obtener el porcentual establecido.”

Por lo que hace al inciso a), debe tenerse presente la intención del Constituyente Permanente al incrementar el porcentaje para la conservación del registro como Partido Político Nacional a partir de la reforma constitucional del año dos mil catorce; en este sentido, en el “Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación, de Reforma del Estado, de Estudios Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, segunda, en relación con las iniciativas con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política-electoral”, en el punto que interesa se estableció:

“A. Aumento del umbral para mantener el registro como Partido Político.

En los procesos de transición, los partidos políticos son principalísimos actores de la vida democrática. Su finalidad primordial es el establecimiento de procedimientos democráticos imparciales, pues más que competir por el poder están construyendo las bases del nuevo Estado. En cierta forma, dejan de ser singularidades en búsqueda de un beneficio político directo e inmediato, para transformarse en formadores del Estado democrático de derecho. Por tal motivo, en la transición, su tarea es única y fundamental, muy diferente a la que se desarrolla dentro de las condiciones ordinarias de la competencia política en una democracia.

(...)

¿Qué es lo que hemos podido apreciar en México con umbrales de representación tan bajos? Primero, un enorme descontento social por los costos de la democracia, pues el umbral tan bajo incentiva la creación de partidos políticos sin suficiente representación popular.

Si bien es cierto que un umbral tan bajo como el vigente en México puede tener la ventaja de ampliar la pluralidad en la arena electoral, también es cierto que resulta incapaz de depurar al sistema político de partidos sin un respaldo popular más amplio produciéndose una fragmentación excesiva del sistema de partidos que induce a una mayor ineficiencia en el conjunto del sistema político.

Del año 2000 a la fecha, dieciséis partidos políticos han participado en elecciones federales, de los cuales, siete han conservado su registro. Como se ve, el umbral de 2% ha sido útil para impedir la obtención o la conservación del registro a partidos que carecen de suficiente representatividad. Aun así, el actual porcentaje ha

permitido la permanencia de formaciones políticas con escasa contribución en términos de su representatividad.

*Finalmente, elevar el porcentaje de votos mínimo necesario previene la existencia de partidos políticos sumamente pequeños que fragmenten en extremo la representación. Una fragmentación extrema diluye la responsabilidad de actitudes no cooperativas en el Congreso. Es decir, un sistema de pocos partidos políticos permite al ciudadano distinguir con claridad las acciones y estrategias de su acción política y parlamentaria. Lo anterior resulta casi imposible en sistemas con una fragmentación extrema, donde los partidos más pequeños pueden asumir comportamientos no cooperativos, sin necesidad de enfrentar los costos de dicha actitud. Así, **un sistema de partidos mayormente representativos, constituye una base importante para el surgimiento de conductas políticas responsables.***"

En ese sentido, el artículo 41 de la Constitución en relación con la LGPP establece los requisitos para la obtención y conservación del registro como Partido Político Nacional, teniendo como finalidad que las fuerzas políticas que participen en la vida democrática de nuestro país, como entidades de interés público, cuenten con el número mínimo de afiliados en el primero caso y con el número mínimo de votos y, en el segundo, que no sólo acrediten una efectiva representación popular sino, como ha sido señalado, conductas políticas responsables a través de su participación activa en la vida parlamentaria.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo establecido por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia emitida en el Recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-204/2018, que en lo que interesa señala:

"En el caso, existe una exigencia impuesta por el Constituyente Permanente a los partidos políticos respecto a su permanencia después de cada elección que se celebre, la cual como se ha visto, consiste en obtener el 3% de la 'votación válida emitida'. Dicha exigencia tiene como finalidad medir a partir de un elemento objetivo la representatividad con la que cuenta cada partido político frente a la ciudadanía; en consecuencia, queda a cargo de aquellos efectuar todas las acciones necesarias y conforme al marco de la ley para generar empatía con la ciudadanía a la cual pretenden representar, a efecto de que ésta en cada ejercicio democrático demuestre su respaldo en las urnas por la opción política con la cual se identifique mejor."

Ahora bien, por lo que hace al derecho de asociación política, conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Constitución, es un derecho reconocido a la ciudadanía, mismo que con la determinación de la Junta General Ejecutiva queda intocado, puesto que no se pronuncia sobre el particular, sino sobre el

requisito de votación que debe acreditar el partido político para la conservación de su registro.

En relación con los argumentos transcritos en el inciso b), si bien la tesis LIII/2016 se trata de una tesis aislada emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuya observancia no es obligatoria, ello no implica que la interpretación realizada por dicho órgano jurisdiccional carezca de sustento.

Lo anterior es así puesto que las candidaturas independientes pretenden ser una manera de fortalecer los derechos políticos de las y los mexicanos, poniendo al alcance de la ciudadanía una figura legal adicional para poder ejercer el derecho tanto al voto activo como pasivo, lo que conlleva a asignarle todos los efectos legales correspondientes a este tipo de manifestaciones.

Por otra parte, conviene recordar que el 11 de mayo del año en curso, este Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG452/2018, en el que se señaló puntualmente lo siguiente:

“(…)

Es importante resaltar, que en el sentido concedido a las disposiciones en estudio se parte de la base de que la votación válida emitida es aquella que resulte de deducir de la suma de todos los votos depositados en las urnas, los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados, acorde con la Tesis LIII/2016 de rubro “VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA. ELEMENTOS QUE LA CONSTITUYEN PARA QUE UN PARTIDO POLÍTICO CONSERVE SU REGISTRO”, en la cual, la Sala Superior consideró que para efectos de la conservación del registro de un Partido Político Nacional la votación válida emitida se integrará con los votos depositados a favor de los diversos partidos políticos y de las candidaturas independientes, que son los que cuentan para elegir presidente, Senadores y Diputados, deduciendo únicamente los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados.

“(…)”

Nota: Énfasis añadido.

Por lo que la interpretación que esta autoridad electoral daría al concepto de votación válida emitida ya había quedado establecida desde esa fecha sin que haya sido controvertido.

Cabe mencionar que, como se estableció en el antecedente IV del presente Dictamen, mediante Acuerdo INE/CG651/2018, aprobado por el Consejo General de este Instituto el dieciocho de julio de dos mil dieciocho relativo a la

reinterpretación del concepto de votación válida emitida para efectos del artículo 41, Base I, párrafo cuarto de la Constitución excluyendo de la misma los votos emitidos para candidatos independientes, se determinó que debía estarse a lo establecido en el acuerdo INE/CG452/2018.

Asimismo, el acuerdo INE/CG651/2018 fue impugnado ante la Sala Superior de la referida autoridad jurisdiccional, en cuya sentencia dictada en el recurso de apelación SUP-RAP-204/2018 confirmó el acuerdo impugnado y razonó lo siguiente:

“Al respecto, esta Sala estima que la norma tildada de inconstitucional es conforme a la Constitución y le da sentido a la intención del Constituyente Permanente cuando introdujo la exigencia a los partidos políticos, de lograr un umbral mínimo de representatividad de la ciudadanía, para efecto de conservar su registro, y a partir de ello tener derecho a participar en la asignación de curules de representación proporcional, y a recibir prerrogativas.

Esta Sala Superior llega a la conclusión de que esa disposición se encuentra conforme a la regularidad marcada por la norma suprema de acuerdo con los siguientes dos ejes: 1) en razón de la operatividad del sistema de participación política que permite que compitan tanto candidatos postulados por partidos políticos como candidatos independientes; 2) en tanto que la Corte, y esta Sala Superior ya se han pronunciado sobre la constitucionalidad del artículo 15, numerales 1 y 2 de la Ley Electoral, en el sentido de que incluir la votación de candidatos independientes en la verificación del umbral mínimo que deben cumplir los partidos para conservar su registro, da coherencia al sistema político electoral y al régimen de partidos.

Por otra parte, como se demostrará el partido promovente parte de una premisa incorrecta al querer confrontar conceptos que por sí mismos, tienen finalidades diferentes, sin que de ello se evidencie colisión alguna con disposiciones constitucionales.

En consecuencia, aun cuando en principio, ese concepto se refiera a la posibilidad de asignación de curules por el principio de representación proporcional, esta Sala Superior considera que dicho concepto también es aplicable a fin de verificar, si un partido político cumple el umbral previsto en la Constitución para conservar su registro.

(...)

Entonces, los votos emitidos a favor de los candidatos independientes son plenamente válidos, tienen su impacto o trascendencia en las elecciones uninominales, y expresan la voluntad del electorado, por una opción política, pues la ciudadanía vota por candidaturas de partido o independientes cuyos nombres aparecen en la boleta.

A partir de ello, la votación emitida por la ciudadanía a favor de una candidatura independiente tiene como fin principal lograr que un candidato acceda al cargo por el que está participando. Sin embargo, en una segunda aproximación, también cuenta para efecto de medir la representatividad que tienen los actores políticos en la contienda, en sentido negativo, pues evidencian una determinada voluntad de que los partidos políticos no cuenten con el apoyo o respaldo de cierto porcentaje de votantes.

(...)

Por tanto, resulta válido sostener que los votos debidamente emitidos, incluyendo los relativos a candidatos independientes deben tener un reflejo respecto a la conservación o no de una determinada fuerza política, pues lo que representan es el sentir ciudadano, es decir, si las opciones políticas existentes reflejan y garantizan su ideología, principios e intereses.

De ahí que, la forma en qué y cómo se otorgan los votos tiene un impacto en dos vertientes, en un primer momento, respecto del acceso al cargo público por el cual se contienda, y en un segundo escenario, por cuanto a la subsistencia o no de las fuerzas políticas contendientes.

Siendo así, el concepto de votación válida emitida, previsto en el artículo 15, numeral 1 de la Ley Electoral, es congruente con la exigencia constitucional regulada en el diverso 41, Base I, que tiene como finalidad salvaguardar el mínimo de representatividad.

(...)

Conforme a lo expuesto, tanto la Corte como esta Sala Superior a través de los ejercicios de interpretación de la norma tildada de inconstitucional, han dejado claro que los votos de candidatos independientes deben tener un impacto en la permanencia de los partidos políticos, pues no existe justificación razonable para dejarlos sin efectos frente a la verificación de representatividad con la que cuentan aquellos, al ser parte del sistema político, pues estos votos, son el resultado de la identificación que tiene la ciudadanía respecto de las opciones políticas que se le presentaron.

En consecuencia, sigue siendo vigente la Tesis LIII/2016 de esta Sala Superior y de rubro VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA, ELEMENTOS QUE LA CONSTITUYEN PARA QUE UN PARTIDO POLÍTICO CONSERVE SU REGISTRO. Por tanto, de acuerdo con las características del sistema de participación política, así como la ruta interpretativa seguida por la Corte y por esta Sala Superior, resulta válido concluir, que el artículo 15, numeral 1, de la Ley Electoral, es conforme y le da sentido a la intención del Constituyente Permanente cuando introdujo la exigencia a los partidos políticos, de lograr un umbral mínimo de representatividad de la ciudadanía, para efecto de conservar su registro, y a partir de ello tener derecho a participar en la asignación de curules de representación proporcional, y a recibir prerrogativas.”

7. El artículo 14 de la Constitución establece que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio

seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes aplicables. Dichas formalidades esenciales se refieren al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas o, en este caso, un partido político como entidad de interés público, estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos.

En tal sentido, dentro del procedimiento para resolver sobre la conservación o la pérdida de registro del partido político de referencia, se le otorgó la garantía de audiencia y se combatieron todos y cada uno de los argumentos que hizo valer.

Por lo cual, tomando en consideración que los argumentos ofrecidos han sido desvirtuados por esta autoridad administrativa, es procedente resolver sobre la conservación o pérdida de registro de Nueva Alianza.

8. Como se ha mencionado, la Junta General Ejecutiva emitió el Acuerdo mencionado en el Antecedente X del presente Dictamen, en el que se declaró que Nueva Alianza se ubica en el supuesto establecido en el artículo 94, párrafo 1, incisos b) y c), de la LGPP al no haber obtenido en la elección ordinaria inmediata anterior el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección para la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, senadurías y diputaciones federales por ambos principios del primero de julio de dos mil dieciocho.

Dicho acuerdo se fundó en los resultados de los cómputos y declaraciones de validez respectivas de los Consejos del Instituto, así como en las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto es, las cifras relativas a los votos de la elección consideraron, entre otros, la deducción de los sufragios derivadas de los cómputos distritales y de las sentencias de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En ese sentido, una vez notificado el acuerdo en comento y valorados los argumentos hechos valer por el partido político afectado, este Consejo General arriba a la conclusión de que debe confirmarse el acuerdo emitido por la Junta General Ejecutiva y, en consecuencia, aprobarse el presente Dictamen.

Asimismo, por lo expuesto en los considerandos anteriores los argumentos vertidos por Nueva Alianza no son suficientes para contrarrestar lo dispuesto

por dicha Junta General Ejecutiva o para otorgarle la razón. En consecuencia, se concluye que Nueva Alianza, en efecto, se ubica en el supuesto establecido en los artículos 41, párrafo segundo, Base I, párrafo cuarto de la Constitución, en relación con el artículo 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la LGPP, por lo que es procedente la declaratoria de pérdida de registro de dicho instituto político.

9. Conforme a lo señalado por el artículo 96, párrafo 1 de la LGPP, al partido político que pierda su registro le será cancelado el mismo y perderá todos los derechos y prerrogativas que establece dicha Ley.
10. Según lo establecido en el artículo 96, párrafo 2 de la LGPP, *“la cancelación o pérdida del registro extinguirá la personalidad jurídica del partido político, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización establece esta Ley, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio”*.
11. Si bien es cierto que el artículo 96, párrafo 2 de la LGPP señala que se extingue la personalidad jurídica del Partido Político Nacional que pierda su registro, también lo es que, para efectos de fiscalización, se prorroga la personalidad de los dirigentes hasta la conclusión del proceso de liquidación del patrimonio. No obstante, a efecto de dotar de certeza sobre las instancias facultadas para el ejercicio del derecho establecido en el artículo 95, párrafo 5 de la LGPP, este Consejo General considera necesario aplicar por analogía lo establecido en el párrafo 2 del artículo 96 de dicha Ley. Esto es, a fin de prorrogar las atribuciones y la integración de los órganos directivos del extinto partido político únicamente para tales fines.

En ese sentido, el artículo 55, párrafo 1, inciso i) de la LGIPE, dispone que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos tiene entre sus atribuciones llevar el libro de registro de los integrantes de los órganos directivos de los partidos políticos, a nivel nacional y estatal, por lo que, para efectos de lo mencionado en el párrafo anterior, serán los integrantes de los órganos estatutarios inscritos en el libro de registro que lleva la referida Dirección Ejecutiva a quienes se les prorroguen sus atribuciones de conformidad con las facultades establecidas en los Estatutos y Reglamentos registrados y vigentes al tres de septiembre de dos mil dieciocho.

En atención a los Antecedentes y Considerandos expresados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 41, párrafo segundo, bases I, último párrafo y

V, apartado A, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, párrafo 1; 30, párrafo 2; 34; 48, párrafo 1, inciso i); 55, párrafo 1, inciso i) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 94, párrafo 1, incisos b) y c); y 96 de la Ley General de Partidos Políticos, y en ejercicio de la atribución que le confieren los artículos 44, párrafo 1, inciso m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; el Consejo General

R E S U E L V E

PRIMERO.- Se aprueba el Dictamen emitido por la Junta General Ejecutiva de este Instituto relativo a la pérdida de registro del Partido Político Nacional denominado Nueva Alianza, al no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho.

SEGUNDO.- Se declara la pérdida de registro como Partido Político Nacional de Nueva Alianza, en virtud de que, al no haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho, se ubicó en la causal prevista en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la Ley General de Partidos Políticos.

TERCERO.- A partir del día siguiente a la aprobación del presente Dictamen, Nueva Alianza pierde todos los derechos y prerrogativas que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Partidos Políticos y demás normatividad aplicable, con excepción de las prerrogativas públicas correspondientes al resto del ejercicio fiscal 2018, que deberán ser entregadas por este Instituto al Interventor respectivo, de conformidad con lo establecido por el artículo 389 del Reglamento de Fiscalización.

CUARTO.- Para efectos del ejercicio del derecho que le otorga el artículo 95, párrafo 5, de la Ley General de Partidos Políticos, se prorrogan las atribuciones y la integración de los órganos estatutarios estatales de Nueva Alianza inscritos en el libro de registro que lleva la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, con las facultades establecidas en los Estatutos y Reglamentos registrados ante esta autoridad.

Asimismo, para efectos de lo establecido en el numeral 5 de los Lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen los otrora Partidos Políticos Nacionales para

optar por el registro como partido político local establecido en el artículo 95, párrafo 5 de la Ley General De Partidos Políticos, deberá entenderse que el plazo para la presentación de la solicitud ante el Organismo Público Local corre a partir de que el presente Dictamen haya quedado firme o, en su caso, a partir de que haya concluido el proceso local extraordinario de la entidad de que se trate.

QUINTO.- Nueva Alianza deberá cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización establecen la Ley General de Partidos Políticos, el Reglamento de Fiscalización y demás normatividad aplicable, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.

SEXTO.- Notifíquese a Nueva Alianza e inscríbese el presente Dictamen en el libro correspondiente.

SÉPTIMO.- Hágase del conocimiento de todas y cada una de las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales del Instituto el presente Dictamen, para los efectos a que haya lugar.

OCTAVO.- Dese vista a la Comisión de Fiscalización para efectos de lo establecido en el artículo 97 de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los diversos 192, párrafo 1, inciso ñ), y 199, párrafo 1, inciso i) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

NOVENO.- Se instruye al Comité de Radio y Televisión para que emita el Acuerdo por el que se modifica la pauta para el segundo semestre del periodo ordinario 2018 con el objeto de reasignar los tiempos del Estado entre los Partidos Políticos Nacionales con derecho a ello a partir de la siguiente orden de transmisión. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos para que notifique a los concesionarios de radio y televisión sobre la pérdida de registro señalada, a fin de que se tomen las medidas necesarias para la sustitución de los promocionales pautados por el otrora partido político por promocionales institucionales en tanto surte efectos la modificación de la pauta antes señalada.

DÉCIMO.- Comuníquese el presente Dictamen a los Organismos Públicos Locales a través de la Unidad Técnica de Vinculación con dichos órganos, para los efectos legales conducentes.

DÉCIMO PRIMERO.- Publíquese el presente Dictamen en el Diario Oficial de la Federación, así como en la página de Internet de este Instituto.

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE PÉRDIDA DE REGISTRO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO NUEVA ALIANZA, EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR LO MENOS EL TRES POR CIENTO DE LA VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA EN LA ELECCIÓN FEDERAL ORDINARIA CELEBRADA EL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO

ANTECEDENTES

- I. **Registro de Nueva Alianza.** El Partido Político Nacional denominado Nueva Alianza (en adelante Nueva Alianza), obtuvo su registro ante el entonces Instituto Federal Electoral mediante Resolución CG146/2005, aprobada el catorce de julio de dos mil cinco, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de mayo de dos mil seis. En tal virtud, el partido político mencionado, al contar con registro vigente ante este Instituto Nacional Electoral, (en adelante INE), participó en la preparación, desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral Federal ordinario correspondiente al año dos mil dieciocho, y ejerció su derecho a postular candidaturas a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, senadurías y diputaciones federales por ambos principios conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución) y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante LGIPE).
- II. **Consulta formulada por Encuentro Social.** El once de mayo de dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria, fue aprobado el “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se da respuesta a las consultas formuladas por el Partido Encuentro Social”, identificado como INE/CG452/2018 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de agosto del presente año. El acuerdo, que no fue impugnado, respondió consultas respecto al porcentaje de votación requerido para mantener el registro de un Partido Político Nacional, sobre la asignación de una diputación federal por el principio de representación proporcional cuya

fórmula contienda simultáneamente por el principio de mayoría relativa y obtenga el triunfo; y respecto al efecto que se produce por haber alcanzado el tres por ciento de la votación válida emitida durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018.

- III. **Jornada Electoral Federal 2018.** El primero de julio de dos mil dieciocho se celebraron elecciones ordinarias federales para elegir Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadurías y diputaciones federales. En ellas participaron los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, MORENA y Encuentro Social, así como las coaliciones denominadas: “Por México al Frente” integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano; “Todos por México” integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza; y “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos del Trabajo, MORENA y Encuentro Social.
- IV. **Segunda consulta formulada por Encuentro Social.** En sesión ordinaria celebrada el dieciocho de julio de dos mil dieciocho, se aprobó el “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se da respuesta a la consulta formulada por el partido denominado Encuentro Social”, identificado con la clave INE/CG651/2018, relativo a la reinterpretación del concepto de votación válida emitida para efectos del artículo 41, Base I, párrafo cuarto de la Constitución, excluyendo de la misma los votos emitidos para candidatos independientes.
- V. **Recurso de apelación promovido por Encuentro Social.** El veintiuno de julio de dos mil dieciocho, Encuentro Social interpuso recurso de apelación, a efecto de controvertir el Acuerdo INE/CG651/2018, mismo que fue resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el tres de agosto del año en curso, confirmando el acto impugnado.
- VI. **Resultados del Proceso Electoral Federal 2017-2018.** Con fecha diecinueve de agosto de dos mil dieciocho, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyó la resolución de los medios de impugnación interpuestos por los partidos políticos y las coaliciones respecto

a los resultados de las elecciones ordinarias federales para elegir Presidente, senadurías y diputaciones, realizadas el primero de julio de dos mil dieciocho.

- VII. Con fechas veintiuno y veintidós de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficios INE/DEOE/1998/2018 e INE/DEOE/2001/2018, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral remitió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos los resultados de las elecciones ordinarias federales para elegir Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadurías y diputaciones federales, conforme a lo siguiente:

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PARTIDO POLÍTICO	VOTACIÓN TOTAL EMITIDA	PORCENTAJE
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	9,996,514	17.6582
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	7,677,180	13.5613
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA	1,602,715	2.8311
PARTIDO DEL TRABAJO	3,396,805	6.0003
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	1,051,480	1.8574
MOVIMIENTO CIUDADANO	1,010,891	1.7857
NUEVA ALIANZA	51,493	0.0915
MORENA	25,186,577	44.4906
ENCUENTRO SOCIAL	1,530,101	2.7028
JAIME HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERÓN	2,961,732	5.2317
CANDIDATURAS NO REGISTRADAS	31,982	0.0565
VOTOS NULOS	1,603,857	2.8331
TOTAL	56,611,027	100

SENADURÍAS DE MAYORÍA RELATIVA

PARTIDO POLÍTICO	VOTACIÓN TOTAL EMITIDA	PORCENTAJE
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	9,852,753	17.5471
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	8,961,369	15.9596
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA	2,973,479	5.2956
PARTIDO DEL TRABAJO	2,149,566	3.8283
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	2,514,578	4.4783
MOVIMIENTO CIUDADANO	2,621,317	4.6684

PARTIDO POLÍTICO	VOTACIÓN <u>TOTAL</u> EMITIDA	PORCENTAJE
NUEVA ALIANZA	1,299,763	2.3147
MORENA	21,013,123	37.4231
ENCUENTRO SOCIAL	1,311,337	2.3354
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES	1,105,624	1.9691
CANDIDATURAS NO REGISTRADAS	30,526	0.0544
VOTOS NULOS	2,316,781	4.1260
TOTAL	56,150,186	100

SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

PARTIDO POLÍTICO	VOTACIÓN <u>TOTAL</u> EMITIDA	PORCENTAJE
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	9,969,069	17.5903
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	9,011,312	15.9003
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA	2,982,826	5.2631
PARTIDO DEL TRABAJO	2,164,088	3.8185
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	2,527,710	4.4601
MOVIMIENTO CIUDADANO	2,654,085	4.6831
NUEVA ALIANZA	1,306,792	2.3058
MORENA	21,256,238	37.5063
ENCUENTRO SOCIAL	1,320,283	2.3296
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES	1,105,624	1.9509
CANDIDATURAS NO REGISTRADAS	31,812	0.0561
VOTOS NULOS	2,343,942	4.1358
TOTAL	56,673,781	100

DIPUTACIONES DE MAYORÍA RELATIVA

PARTIDO POLÍTICO	VOTACIÓN <u>TOTAL</u> EMITIDA	PORCENTAJE
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	10,033,157	17.9334
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	9,271,950	16.5728
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA	2,959,800	5.2904
PARTIDO DEL TRABAJO	2,201,192	3.9345
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	2,685,677	4.8004
MOVIMIENTO CIUDADANO	2,473,056	4.4204

PARTIDO POLÍTICO	VOTACIÓN <u>TOTAL</u> EMITIDA	PORCENTAJE
NUEVA ALIANZA ²	1,385,421	2.4763
MORENA	20,790,623	37.1614
ENCUENTRO SOCIAL	1,347,540	2.4086
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 1 ¹	534,975	0.9562
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 2 ²	3,989	0.0071
CANDIDATURAS NO REGISTRADAS	32,611	0.0583
VOTOS NULOS	2,226,781	3.9802
TOTAL	55,946,772	100

DIPUTACIONES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

PARTIDO POLÍTICO	VOTACIÓN <u>TOTAL</u> EMITIDA	PORCENTAJE
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	10,093,012	17.9321
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	9,307,233	16.5361
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA	2,967,452	5.2722
PARTIDO DEL TRABAJO	2,210,988	3.9282
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	2,694,654	4.7876
MOVIMIENTO CIUDADANO	2,484,185	4.4136
NUEVA ALIANZA	1,390,882	2.4712
MORENA	20,968,859	37.2551
ENCUENTRO SOCIAL	1,353,499	2.4047
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 1 ³	534,975	0.9505
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 2 ⁴	3,989	0.0071
CANDIDATURAS NO REGISTRADAS	32,938	0.0585
VOTOS NULOS	2,241,811	3.9830
TOTAL	56,284,477	100

¹ Candidato Independiente 1, comprende la suma de votos de los candidatos independientes que contendieron como únicos o fueron registrados en primer lugar.

² Candidato Independiente 2, comprende la suma de votos de los candidatos independientes que fueron registrados en segundo lugar en el mismo distrito.

³ Candidato Independiente 1, comprende la suma de votos de los candidatos independientes que contendieron como únicos o fueron registrados en primer lugar.

⁴ Candidato Independiente 2, comprende la suma de votos de los candidatos independientes que fueron registrados en segundo lugar en el mismo distrito.

- VIII.** En sesión extraordinaria de fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del INE efectuó el cómputo total, la declaración de validez de la elección y la asignación de senadurías y diputaciones federales por el principio de representación proporcional mediante los Acuerdos INE/CG1180/2018 e INE/CG1181/2018.
- IX.** Con fecha veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió los Recursos de Reconsideración interpuestos en contra de los Acuerdos mencionados en el numeral que antecede, con lo que se confirmó el contenido de los mismos.

CONSIDERANDO

Atribuciones del Instituto Nacional Electoral

1. En términos de lo preceptuado en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo primero, de la Constitución en relación con los artículos 29, párrafo 1 y 30, párrafo 2 de la LGIPE, el INE es un organismo público autónomo que tiene como función estatal la organización de las elecciones y es autoridad en la materia, cuyas actividades se rigen por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
2. El artículo 34 de la LGIPE, dispone que el Consejo General; la Presidencia del Consejo General; la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva, constituyen los órganos centrales del INE.

Competencia de la Junta General Ejecutiva

3. Los artículos 47 y 49, de la LGIPE señalan que la Junta será presidida por el Presidente del Consejo General y se integrará con el Secretario Ejecutivo y con los directores ejecutivos del Registro Federal de Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, del Servicio Profesional Electoral Nacional, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Administración, así como los titulares de la Unidad Técnica de

Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales; el Contralor General podrá participar, a convocatoria del Consejero Presidente. Asimismo, el Secretario Ejecutivo coordina la Junta, conduce la administración y supervisa el desarrollo adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto.

4. El artículo 48, párrafo 1, inciso i) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que la Junta debe elaborar la declaratoria sobre la pérdida de registro y el Proyecto de Resolución que deberá someter a consideración del Consejo General.

Causales de pérdida de registro como Partido Político Nacional

5. En términos de lo previsto en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo de la Constitución, “el partido político que no obtenga, al menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.
6. El artículo 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la Ley General de Partidos Políticos (en adelante LGPP), establece como causal de pérdida de registro de un Partido Político Nacional la de no obtener por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputaciones, senadurías o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, si participa solo o coaligado.
7. Al respecto, el Punto Primero del Acuerdo del Consejo General del INE, por el que se da respuesta a las consultas formuladas por el Partido Encuentro Social, identificado con el número INE/CG452/2018, aprobado por dicho órgano colegiado en sesión extraordinaria celebrada el once de mayo del año en curso y publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de mayo del mismo año, estableció que los Partidos Políticos Nacionales conservarán su registro ante el INE, al obtener por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida, indistintamente, en la elección de diputados federales, o en la de senadores o en la de Presidente de la República, a partir de la interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 41,

párrafo segundo, Base I, párrafo cuarto de la Constitución y 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la LGPP.

8. De conformidad con lo establecido en el artículo 95, párrafo 1 de la LGPP, para la pérdida de registro a que se refieren los incisos a) al c) del párrafo 1 del citado artículo 94 de dicha ley, la Junta General Ejecutiva del INE emitirá la declaratoria correspondiente, misma que deberá fundarse en los resultados de los cómputos y declaraciones de validez respectivas de los Consejos del INE, así como en las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto es, las cifras relativas a los votos de la elección consideran, entre otros, la deducción de los sufragios derivadas de los cómputos distritales y de las sentencias de las salas que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
9. Cabe mencionar que, conforme a lo establecido en los artículos 44, párrafo 1, inciso m) y 48, párrafo 1, inciso i) de la LGIPE, en relación con lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las sentencias identificadas con los acrónimos SUP-JDC-1710/2015 y acumulados y SUP-RAP-654/2015 y acumulados, la Junta General Ejecutiva únicamente debe elaborar la declaratoria sobre la pérdida de registro y el Proyecto de Resolución que deberá someter a consideración del Consejo General, para que sea éste quien resuelva en definitiva si un Partido Político Nacional pierde o conserva su registro como tal.

Validez de la elección

10. Conforme a lo previsto en el artículo 225, párrafos 1, 5 y 6 de la LGIPE, de acuerdo con los cómputos efectuados por los Consejos del INE y con las resoluciones emitidas en última instancia por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue declarada la validez de la elección ordinaria federal celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho.

Votación válida emitida

11. Acorde con lo establecido en el artículo 15, párrafo 1 de la LGIPE en relación con lo determinado por el Consejo General mediante Acuerdo identificado con la clave INE/CG641/2015, aprobado en sesión extraordinaria el doce de

agosto de dos mil quince y confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia dictada en el expediente SUP-RAP-430/2015, se entiende por votación válida emitida la que resulte de deducir los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados de la suma de todos los votos depositados en las urnas.

12. Sirve de sustento para lo anterior, lo sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Tesis LIII/2016, que a la letra señala:

*VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA. ELEMENTOS QUE LA CONSTITUYEN PARA QUE UN PARTIDO POLÍTICO CONSERVE SU REGISTRO.-De la interpretación de los artículos 41, fracción I, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15, apartados 1 y 2, y 437, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 94, párrafo 1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos, se advierte que, los partidos políticos a fin de conservar su registro deben obtener al menos el 3% de la votación válida emitida en la última elección en la que participen. Ahora bien, a través de la figura de las candidaturas independientes, los ciudadanos pueden participar para ser votados a cargos de elección popular. Por ello, **los votos emitidos a favor de las candidaturas independientes son plenamente válidos, con impacto y trascendencia en las elecciones uninominales, por lo que deben computarse para efectos de establecer el umbral del 3% para la conservación del registro de un partido político**, en virtud de que éste es determinado por la suma de voluntades ciudadanas a través del sufragio, en un porcentaje suficiente que soporte la existencia de un instituto político. De ahí que, para efectos de la conservación del registro de un Partido Político Nacional **la votación válida emitida se integrará con los votos depositados a favor de los diversos partidos políticos y de las candidaturas independientes**, que son los que cuentan para elegir presidente, senadores y diputados, deduciendo los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados.*

Quinta Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-430/2015.—Recurrente: Partido del Trabajo.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.—19 de agosto de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanís Figueroa.—Secretarios: Roberto Jiménez Reyes y Carlos Vargas Baca.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el quince de junio de dos mil dieciséis, aprobó por unanimidad de votos, con la ausencia del Magistrado Manuel González Oropeza, la tesis que antecede.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 141 y 142.⁵

13. Es por ello que, al deducir los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados de la votación total emitida, se obtiene que Nueva Alianza no alcanzó cuando menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones, de conformidad con las cifras señaladas en el antecedente VI del presente Acuerdo, según se desprende de los cómputos nacional y distritales y de las resoluciones que en última instancia emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por ese motivo, se coloca en el supuesto establecido en el artículo 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la LGPP como consta en los cuadros siguientes:

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS		
PARTIDO POLÍTICO Y CANDIDATO INDEPENDIENTE	VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA	PORCENTAJE
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	9,996,514	18.1837
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	7,677,180	13.9648
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA	1,602,715	2.9153
PARTIDO DEL TRABAJO	3,396,805	6.1788
PARTIDO VERDE ECOLÓGISTA DE MÉXICO	1,051,480	1.9126
MOVIMIENTO CIUDADANO	1,010,891	1.8388
NUEVA ALIANZA	551,193	1.0208
MORENA	25,186,577	45.8145
ENCUENTRO SOCIAL	1,530,101	2.7833
JAIME HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERÓN	2,961,732	5.3874
TOTAL	54,975,188	100%

⁵ Énfasis añadido.

SENADURÍAS DE MAYORÍA RELATIVA

PARTIDO POLÍTICO Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES	VOTACIÓN <u>VÁLIDA</u> EMITIDA	PORCENTAJE
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	9,852,753	18.3127
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	8,961,369	16.6559
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA	2,973,479	5.5266
PARTIDO DEL TRABAJO	2,149,566	3.9953
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	2,514,578	4.6737
MOVIMIENTO CIUDADANO	2,621,317	4.8721
NUEVA ALIANZA	1,299,738	2.4157
MORENA	21,013,123	39.0558
ENCUENTRO SOCIAL	1,311,337	2.4373
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES	1,105,624	2.0549
TOTAL	53,802,879	100

SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

PARTIDO POLÍTICO Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES	VOTACIÓN <u>VÁLIDA</u> EMITIDA	PORCENTAJE
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	9,969,069	18.3599
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	9,011,312	16.5960
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA	2,982,826	5.4934
PARTIDO DEL TRABAJO	2,164,088	3.9856
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	2,527,710	4.6553
MOVIMIENTO CIUDADANO	2,654,085	4.8880
NUEVA ALIANZA	1,306,792	2.4067
MORENA	21,256,238	39.1473
ENCUENTRO SOCIAL	1,320,283	2.4315
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES	1,105,624	2.0362
TOTAL	54,298,027	100

DIPUTACIONES DE MAYORÍA RELATIVA

PARTIDO POLÍTICO Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES	VOTACIÓN <u>VÁLIDA</u> EMITIDA	PORCENTAJE
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	10,033,157	18.6881
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	9,271,950	17.2703
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA	2,959,800	5.5130
PARTIDO DEL TRABAJO	2,201,192	4.1000
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	2,685,677	5.0024
MOVIMIENTO CIUDADANO	2,473,056	4.6064
NUEVA ALIANZA	1,385,421	2.5805
MORENA	20,790,623	38.7254
ENCUENTRO SOCIAL	1,347,540	2.5100
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 1	534,975	0.9965
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 2	3,989	0.0074
TOTAL	53,687,380	100

DIPUTACIONES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

PARTIDO POLÍTICO Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES	VOTACIÓN <u>VÁLIDA</u> EMITIDA	PORCENTAJE
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	10,093,012	18.6874
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	9,307,233	17.2325
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA	2,967,452	5.4943
PARTIDO DEL TRABAJO	2,210,988	4.0937
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	2,694,654	4.9892
MOVIMIENTO CIUDADANO	2,484,185	4.5995
NUEVA ALIANZA	1,390,332	2.5752
MORENA	20,968,859	38.8242
ENCUENTRO SOCIAL	1,353,499	2.5060
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 1	534,975	0.9905
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 2	3,989	0.0074
TOTAL	54,009,728	100

14. Conforme a los considerandos 3, 4 y 9 del presente Acuerdo, esta Junta General debe someter a consideración del Consejo General la presente declaratoria y elaborar el Proyecto de Resolución respectivo, previa garantía del derecho de audiencia del partido afectado.
15. En este sentido debe darse vista a Nueva Alianza con esta declaratoria a través de su representación ante el Consejo General del INE, para que en un término de setenta y dos horas alegue lo que a su derecho convenga mediante escrito que presente ante el Secretario Ejecutivo del INE. Una vez fenecido dicho plazo, se elaborará el Proyecto de Resolución valorando la respuesta que, en su caso, se haya presentado, a fin de estar en condiciones de que esta Junta General Ejecutiva apruebe someterlo al Consejo General.

En atención a los antecedentes y consideraciones expresados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Bases I y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15, párrafo 1; 29, párrafo 1, 30, párrafo 2, 34, y 225, párrafos 1, 5 y 6 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la Ley General de Partidos Políticos; así como en los resultados de los cómputos y declaraciones de validez respectivas de los Consejos del Instituto Nacional Electoral y en las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictadas en los expedientes SUP-JDC-1710/2015 y acumulados y SUP-RAP-654/2015 y acumulados; y en el ejercicio de la atribuciones que le confieren los artículos 48, párrafos 1, incisos i) y o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 95 de la Ley General de Partidos Políticos; esta Junta General Ejecutiva emite el siguiente

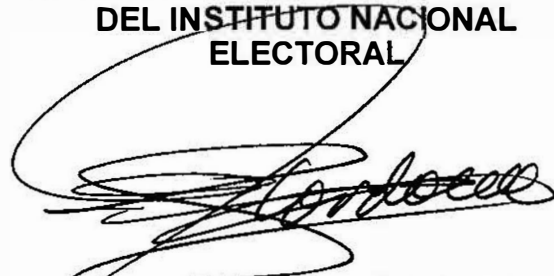
ACUERDO

PRIMERO. Se declara que Nueva Alianza se ubica en el supuesto establecido en el artículo 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la Ley General de Partidos Políticos, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputaciones federales, senadurías o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO. En términos del Considerando 15 del presente Acuerdo, dese vista al partido político Nueva Alianza con la presente declaratoria, a fin de garantizar su derecho de audiencia y que esté en condiciones de alegar lo que a su derecho convenga en un término de setenta y dos horas contado a partir de su legal notificación. Una vez transcurrido dicho término, elabórese el Proyecto de Resolución respecto de la pérdida de registro de Nueva Alianza, para que, previa aprobación de este órgano colegiado, se someta a consideración del Consejo General del INE.

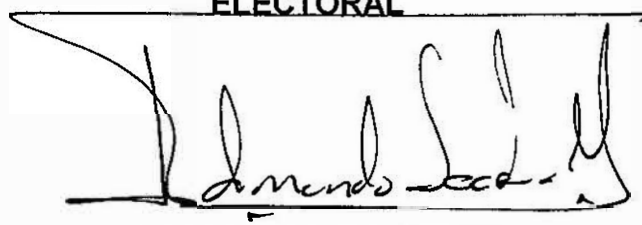
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva celebrada el 3 de septiembre de 2018, por votación unánime de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto, de los Directores de las Unidades Técnicas de Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez Picazo; de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello; no estando presente durante el desarrollo de la sesión el Director Ejecutivo de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL Y PRESIDENTE
DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL**



**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**EL SECRETARIO EJECUTIVO Y
SECRETARIO DE LA JUNTA
GENERAL EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL**



**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario del Consejo. _____

Le pido que realice las gestiones necesarias para publicar el Dictamen recién aprobado en el Diario Oficial de la Federación. _____

Del mismo modo, le pido que continúe con el siguiente asunto del orden del día. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Dictamen del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativo a la pérdida de registro del Partido Político Nacional denominado Encuentro Social, en virtud de no haber obtenido por lo menos el 3 por ciento de la votación válida emitida en la Elección Federal Ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de Dictamen mencionado. _____

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Hugo Eric Flores Cervantes, representante del Partido Encuentro Social. _____

El representante suplente de Encuentro Social, Ciudadano Hugo Eric Flores Cervantes: Gracias, Consejero Presidente. _____

Muy buenas tardes. _____

Para los militantes de Encuentro Social no existe en la historia reciente de los partidos políticos en nuestro país una situación tan paradójica, somos el segundo partido político con mayor crecimiento en la historia de los partidos políticos recientes, solo detrás de MORENA, y hoy acudimos ante esta sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para hacer notar esta paradoja que tiene, de verdad, muchísimos matices que nosotros consideramos absolutamente una injusticia. _____

A diferencia de lo aquí expuesto por el Compañero Presidente de Nueva Alianza, desde luego que nosotros sí tenemos muchas cosas que decir con respecto a la organización de las elecciones. _____

En un primer nivel, no quisiera ser muy exhaustivo, desde luego que reconocemos el trabajo que se ha hecho, los procedimientos que existen, pero no necesariamente todo en este Proceso Electoral fue perfecto, y acudo aquí básicamente para hablar a nombre de miles de gentes que han creído en este Proyecto, somos un Proyecto que comenzó hace 18 años, yo tengo las etapas del proceso de nuestro partido muy bien dimensionadas, porque son la edad de mis hijos. _____

Fuimos Agrupación Política hace 18 años, cuando nació mi primer hijo, tuvimos nuestro primer Partido Político Estatal cuando nació mi segundo hijo, y decidimos ser Partido Político Nacional cuando nació mi tercer hijo. _____

A nombre de toda esa gente que ha confiado en nosotros, tengo que venir a decir que estamos siendo víctimas de una injusticia porque nuestros votos no fueron correctamente contados ¿Y básicamente qué votos no fueron correctamente contados? Fueron los votos que fueron tachados en una Boleta Electoral por los 3 partidos políticos que conformaban nuestra Coalición, o por 2 partidos políticos que conformaban nuestra Coalición. No están distribuidos de manera correcta esa votación, y evidentemente, hoy sí tenemos muchas evidencias, en base a los propios resultados que la autoridad electoral nos ha dado para poder decir que los principios de certeza, de transparencia, y de legalidad no fueron bien hechos, no se cumplieron en este Proceso Electoral en el caso de la votación del Partido Encuentro Social. _____

Decía Dieter Nohlen que una votación digna de confianza reclamaba resultados electorales objetivamente correctos, autoridades electorales que garantizaran un resultado, desarrollo normal y ordenado del acto electoral, y que los procedimientos que permitieran comprobar adecuadamente los resultados electorales efectivos. En pocas palabras, un derecho electoral democrático. _____

Eso es lo que hoy venimos a decir, sí creemos que hay una buena institución, pero también creemos que hay problemas en el procedimiento. _____

Desde el Manual de Capacitación de los Funcionarios de Casilla una falta de interés de poder enseñar a los que iban a contar los votos que fueran y que lo hicieran de manera correcta. _____

Yo tengo que señalar de manera muy concreta, que es evidente en la recuperación de votos que tenemos como Partido Encuentro Social de los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) a los resultados del Cómputo, que hubo muchísimos errores en el momento de contar los votos del Partido Encuentro Social y en general de nuestra Coalición. _____

Doy ejemplos; nosotros recuperamos 307 mil votos, 307 mil 506 votos de manera concreta entre los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y los Resultados del Cómputo, básicamente, en 3 bloques: _____

Primero, casillas que venían sin datos. _____

Segundo, votos recuperados en el cotejo, que fueron los menos y, _____

Tercero, y éste es el tramo más importante. Los votos recuperados en las casillas abiertas. _____

Reconocemos que la autoridad hizo un gran esfuerzo, más de 117 mil casillas reabiertas fue lo que permitió a nosotros darnos cuenta que había miles y miles de casillas en cero para el Partido Encuentro Social, y a medida que fueron transcurriendo las sesiones de cómputo nos dimos cuenta que estábamos empezando a recuperar votación. _____

El porcentaje de votos que recuperamos fue de 7.2 casillas, por cada una de las casillas que se abrieron y que estaban en cero o en un voto, hay una inconsistencia muy importante en los resultados, inclusive, en los que recientemente nos acaba de dar la autoridad electoral para poder decir eso. _____

Nosotros decimos que eran 31 mil casillas y ahora que nos entregaron el análisis de la autoridad electoral, dijeron que eran 55 mil 809 casillas. Por cierto, un análisis un poco tardío, porque nosotros lo veníamos solicitando de tiempo a la fecha, en fin. _____

La verdad es que nosotros estamos convencidos que la posibilidad de la apertura y sé que me van a empezar a decir que el principio de definitividad y, bueno, yo les puedo decir, el principio de exhaustividad y ese, la verdad no quisiera yo entrar en esa discusión. _____

Lo único que tengo que decir es que, definitivamente la votación no estuvo bien contada para Encuentro Social, porque esta distribución de los votos que se debió haber dado entre los partidos de nuestra Coalición, no se hizo de manera correcta y eso es lo que tiene Encuentro Social en esta posibilidad, de perder su registro como Partido Político Nacional._____

Estuve discutiendo con los miembros más cercanos, los fundadores de este partido político, porque, finalmente, son 18 años de trabajo, de gentes que no nos dedicábamos a la política, que no tenemos familiares políticos, que no somos de la clase política de este país, qué íbamos a decir porque no queremos venir a engañar ni al Tribunal Electoral, mucho menos a los Consejeros Electorales, ni a la opinión pública, pero sobre todo, a los miles y miles de mexicanos que votaron por el Partido Encuentro Social.____ Pusimos ante la autoridad nuestra audiencia Constitucional, no desahogaron las pruebas, desafortunadamente, hay hechos contundentes y consumados, que nosotros planteamos en esta audiencia Constitucional que desafortunadamente no fueron valorados a la hora de ya emitir el Anteproyecto que hoy nos tiene sentados en esta sesión._____

Evidentemente, tenemos que decir, que sí creemos que parte de esta responsabilidad está en la autoridad electoral, nos queda muy claro que han hecho su mejor esfuerzo, pero también a ustedes y a todos los mexicanos nos debe quedar claro, que desafortunadamente por el Sistema Electoral que tenemos, todavía se presentan algunas fallas, y quiero concluir esta participación con lo siguiente:_____

Vamos a presentar una iniciativa para que se constitucionalice el concepto de votación válida emitida, porque sigue habiendo muchas confusiones, y desafortunadamente ustedes tuvieron que interpretar lo que ustedes creían que decía la Constitución y se tendrá que constitucionalizar._____

Y la otra y más importante, desde luego que nosotros estamos de acuerdo que si no hay un tache en una Boleta Electoral por un partido político este no debe de existir, desde luego que nosotros no estamos de acuerdo en el Sistema viejo, aquel donde se sentaban los partidos políticos a decir, este es el porcentaje para los miembros de la

Coalición, no, queremos que sea un tache por cada partido político, pero sobre todo, que se cuenten muy bien los votos cuando sea, por ejemplo, el caso de nuestra Coalición._____

Termino diciendo lo siguiente, vamos a presentar también una iniciativa para el voto electrónico, afortunadamente tenemos decenas de Diputados que van a estar respaldando la posición de nuestro partido político y termino con esto: vamos a proponer una iniciativa para el voto electrónico porque esa sería una manera muy sencilla de distribuir correctamente los votos entre los partidos políticos de la Coalición y que desafortunadamente hoy está poniendo en vilo el registro de nuestro partido político._____

Por su atención gracias._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias a usted señor representante. _____

Tiene el uso de la palabra el Maestro Pedro Vázquez, representante del Partido del Trabajo._____

El C. representante del Partido del Trabajo, Maestro Pedro Vázquez González: Gracias, Consejero Presidente. _____

Consejeras, Consejeros y representantes._____

Expresaré algunos puntos de vista y opiniones en relación al Proyecto de Acuerdo que ya fue votado, también lo tocaré, y nuevamente el punto 12 del orden del día._____

El día de hoy se presenta ante este Consejo General el Proyecto de Acuerdo por el que se determina lo referente a la pérdida del registro de los Partidos Políticos Nacionales Nueva Alianza y Encuentro Social._____

¿Qué causas llevaron a este punto sin retorno al Partido Encuentro Social, nuestro aliado político en las pasadas elecciones federales?, y también, desde luego, al Partido Nueva Alianza integrante de otra Coalición electoral._____

Los factores pueden ser muchos y muy variados, como lo es la propia situación política, no pretendo especular ni fantasear sobre la realidad que hoy nos trae a este momento, pero sí tiene un valor simbólico que quiero resaltar, lo puedo decir y de eso estamos

completamente convencidos de que el Sistema de Partidos Políticos no es un Modelo agotado, ni caduco ni anacrónico, por el contrario, el pasado Proceso Electoral Federal los 30 Procesos Locales lo demuestran y nos dan la razón. _____

El Sistema de Partidos Políticos en México, efectivamente es imperfecto, pero es más perfectible, y esa es la lección que nos dan los resultados del pasado 1 de julio a lo que algunos han denominado “El Tsunami Ciudadano”. _____

Después de presentarse una gran oportunidad con la alternancia del año 2000, los partidos políticos no supimos aprovechar esta coyuntura para consolidar la democracia y la pagamos muy caro, con aquellas tristes elecciones de 2006. _____

El Partido del Trabajo tiene su origen como organización social a finales de los 60's, y en aquellas elecciones de 1976 con un candidato único a la Presidencia, se detonaron toda una serie de reformas que lograron la inclusión de las minorías bajo la figura de la Representación Proporcional. _____

Encuentro Social logró consolidar sus objetivos en la conformación de un Partido Político Nacional, y con ello velar por los intereses de un sector de la sociedad mexicana. _____

Este pasado 3 de septiembre la Junta General Ejecutiva de este Instituto aprobó el Acuerdo, mediante el cual se emitió la declaratoria de pérdida del registro de Encuentro Social y Nueva Alianza, al no haber alcanzado el 3 por ciento de la votación Válida emitida en la pasada Elección Ordinaria celebrada el 1 de julio. _____

Hoy este Consejo General aprueba el Dictamen de la Junta General Ejecutiva por el que se declara la pérdida del registro de nuestro compañero coaligado. _____

Debemos de plantear en la Reforma Política venidera sobre la dualidad que se presenta el día de hoy, y es que la pérdida del registro del Partido Encuentro Social, pero con una representación en la Cámara de Diputados que supera el 10 por ciento y en la de Senadores más del 5 por ciento. _____

Supone y representa que no podemos llegar a las Elecciones de 2021 con tales incongruencias, a nuestros coaligados les asiste el Derecho Constitucional y legal de

conformar nuevamente un partido político y ser actores del cambio que exige la sociedad mexicana. _____

No podemos acallar las voces de más de un millón y medio de ciudadanos que eligieron a esa opción política en las pasadas Elecciones Federales, tampoco, podemos estar estáticos ante esta debacle del Sistema de Partidos Políticos, porque ello conllevaría a cometer los mismos errores. _____

Podrá ser legal esta acción, pero la consideramos carente de legitimidad ante la ciudadanía que optó por una oferta política como lo fue con Encuentro Social. _____

A nuestros compañeros coaligados de Encuentro Social y a los compañeros de Nueva Alianza, nuestra solidaridad, estamos seguros de que nos volveremos a encontrar en los diferentes escenarios de la vida pública de nuestro México, y a la que tantas voces disidentes le hacen falta. _____

Es cuanto. _____

Muchas gracias Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor representante. _____

Tiene la palabra el Diputado Horacio Duarte, representante de MORENA. _____

El C. representante de MORENA, Licenciado Horacio Duarte Olivares: Gracias, Consejero Presidente. _____

Buenas tardes a todas y a todos. _____

Para plantear nuestra posición sobre este punto del orden del día, respecto a la pérdida del registro de Encuentro Social. _____

Para MORENA, Encuentro Social forma y formará parte de la Coalición gobernante que a partir del 1 de diciembre gobernará este país, con o sin registro se materializará el Proyecto de Nación que postuló al Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador. _

Y en el marco de esa coalición de MORENA, Partido del Trabajo y Encuentro Social, haremos posible lo que denominamos la cuarta transformación de la vida pública del país. _____

La presencia de Encuentro Social como una fuerza política viva, con representación en ese Gobierno, con representación en el Congreso de la Unión con grupos parlamentarios, con un Gobierno estatal, con representación en la mayoría de los congresos estatales, con grupos parlamentarios locales, con un centenar de Gobiernos municipales que en los próximos meses estarán asumiendo los cargos a lo largo y ancho del país, son prueba de que esta organización tiene presencia territorial, política y forma parte, insisto, de esta Coalición ganadora del pasado 1 de julio. _____

Es así que, para MORENA, con este acto no concluye ni la Coalición ni la vida de Encuentro Social. Manifestamos nuestra solidaridad, apoyo y acompañamiento en la ruta jurídica que todavía debe recorrerse en este tema. _____

Creo que la definición que el día de hoy se tome, sin duda también nos debe abrir la puerta a la discusión sobre temas, que sin duda estarán en el “ojo público”, en el escrutinio social y en el debate de lo que debe ser el Sistema Electoral Mexicano, y de cómo podemos construir un Sistema Electoral más robusto. _____

Sin duda, el tema del porcentaje para mantener el registro es un tema que seguramente se debatirá, se señalará y se revisarán los precedentes que tuvimos en legislaciones de hace algunos años. _____

Seguramente estará en el debate el tema planteado por MORENA, sobre la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, de cómo hacemos más eficientes a las autoridades electorales, tanto en su número de integración de miembros de los órganos de dirección o de los órganos jurisdiccionales; cómo la austeridad como principio rector del Estado, llega también y llegue también a los órganos electorales para que de esa manera los ciudadanos sepan y conozcan que las autoridades electorales, de donde surgen todos los procedimientos para instalar a las autoridades constitucionales, forman parte de estos principios de austeridad. _____

Sin duda, se ha abierto también un debate sobre cómo fortalecer el Sistema Electoral y garantizar que la expresión de los votos sea la expresión que tengamos los partidos políticos en el Congreso. Traducir los votos en curules, sin duda, ha abierto un debate y en ese debate vamos a estar en MORENA. _____

No somos ajenos a la realidad, no somos ajenos a lo que ahora el Modelo nos planteó como reto y que para MORENA significó acatar las reglas que generaron otros institutos políticos, y que seguramente habrán de revisarse. _____

Seguramente también, estará en el escrutinio público como elemento fundamental para MORENA, el hacer realidad de eliminar para siempre la compra del voto, y todo aquello que constituya delitos electorales que tengan eficacia en su persecución y en su sanción. _____

En MORENA aspiramos a que los delitos electorales no sean solo estadísticas de denuncias presentadas ante las fiscalías, si no tengan sanciones que eviten destierren para siempre ese pernicioso mecanismo de la compra del voto, habrá que revisar seguramente los procedimientos electorales sancionadores y el viejo debate de si mantenerlos en la autoridad administrativa o llevarlos al ámbito de las autoridades jurisdiccionales. _____

Y sin duda el tema más importante es la relación del dinero con la política, tiene que revisarse a pesar de los avances que hoy tenemos, a pesar del triunfo de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, el Modelo de Fiscalización para que una y otra vez reiteremos que la expresión del dinero en las campañas no sea la expresión de los votos, sino sea la expresión del voto libre e informado lo que defina los ganadores. _____

Nosotros sostenemos que Encuentro Social puede y debe tener vida en el marco del Sistema constitucional, sin duda en esta etapa de impugnación en la que estarán yendo al Tribunal Electoral, esperamos también que en el Tribunal Electoral haya sensibilidad, haya apego a la Ley y se revise de manera integral cuáles son las condiciones que se tienen para la pérdida o no del registro de un partido político, por eso reiteramos el acompañamiento a Encuentro Social, la solidaridad y reiterar de manera clara que independientemente del resultado de esta impugnación que estará presentada, nosotros en MORENA consideramos que la Coalición gobernante, la Coalición Parlamentaria en el Congreso de la Unión, las coaliciones parlamentarias en los congresos de los estados tendrán vida para largo, porque a eso nos comprometimos frente a los ciudadanos, hacer, llevar y ejecutar un Proyecto de Nación que

compartimos, que firmamos y que vamos a empujar juntos, Partido del Trabajo, MORENA y Encuentro Social para que de esa manera se cumpla el mandato popular expresado el pasado 1 de julio._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor representante._____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños._____

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente._____

Para formular algunas reflexiones en torno a este punto que está a consideración del Consejo General y que tiene que ver con la pérdida de registro de uno de los Partidos Políticos, aprovecho, también para hacer alguna referencia al punto inmediato anterior, reconociendo el discurso pronunciado aquí por el Dirigente Nacional del Partido de Nueva Alianza, agradecerle las consideraciones hacia la institución y por supuesto la institucionalidad que siempre tuvimos con el Partido de Nueva Alianza en las diversas instancias del Instituto Nacional Electoral, pero siempre también con la Dirigencia Nacional encabezada por el Maestro Luis Castro Obregón._____

Quiero decir que los Proyectos de Acuerdo que están listados en este apartado, son en rigor una especie déjenme usar una expresión minimalista, pero es en cierta medida una expresión aritmética de ciertos elementos que se presenta en el desahogo de los procesos comiciales, se alcanza un determinado porcentaje de los votos, mantiene el registro, la Ley lo ha establecido en el 3 por ciento, evolucionando primero del 1 y medio al 2 por ciento, y ahora al 3 por ciento en las Reformas Electorales antecedentes._____

En ese sentido, sí nos alcanza en alguna de las elecciones que se celebran, ese 3 por ciento de la votación, pues entonces la Ley establece que se debe decretar la pérdida del registro del partido político que se encuentra en ese escenario._____

Obviamente aquí, por la complejidad que ha tenido el Proceso Electoral en la parte técnica, hay ciertos elementos que efectivamente, son sujetos de observaciones. Creo que, a través de la estructura que tiene el Instituto Nacional Electoral, sí se desplegó una campaña intensa de capacitación del funcionario de Mesa Directiva de Casilla, y

es un hecho que los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla tienen una especie de sábana, digámoslo así, es un documento en el cual se van colocando las boletas que están cruzadas por 2 o por 3 partidos políticos. _____

Aquí tuvimos elecciones donde hubo un Candidato Independiente, donde hubo candidatos partidarios, pero los candidatos partidarios en los 3 casos fueron por la vía de las coaliciones, así que era válido colocar una marca en la boleta por un solo partido político, por 2 o por 3 partidos, y en consecuencia, el Funcionario de Casilla tiene que ir haciendo una clasificación de esos votos para sumarlos. Pero, hay un detalle que sí es relevante en este punto, el Funcionario de Casilla no clasifica los votos, no los distribuye en función del número que le correspondería a cada uno de los partidos políticos, sino que esa distribución de los votos, dependiendo de las combinaciones 2 o hasta 3 partidos políticos, se realiza en el seno de los Consejos Distritales durante el proceso de los cómputos definitivos. _____

También es un hecho, y es un hecho inédito que en esta ocasión algunos instrumentos del Instituto Nacional Electoral tuvieron porcentajes menores de captura de los resultados de las actas, el Programa de Resultados Electorales Preliminares registró arriba del 93 por ciento de actas en la captura, y por supuesto que el cómputo tuvo el 100 por ciento de las actas que llegaron a cada uno de los 300 Consejos Distritales. Justo con esa acotación es que el representante del Partido Encuentro Social menciona que hay una diferencia de más de 200 mil votos entre el Programa de Resultados Electorales Preliminares y en el caso de los resultados finales de los cómputos. _____

Ahí insisto, tuvimos al menos 6 por ciento de actas no consideradas en la captura del Programa de Resultados Electorales Preliminares, como sí están en el contexto de los resultados de los Cómputos Distritales. _____

Es un hecho que hay, efectivamente, algunos criterios de clasificación de los votos que en los Consejos Distritales incrementaron el porcentaje de la votación del Partido Encuentro Social, y que, si la memoria no me está fallando, le dieron 2 décimos más que en el caso del Programa de Resultados Electorales Preliminares, había más o menos 2 y medio puntos porcentuales en el caso del Programa de Resultados

Electores Preliminares, y al finalizar los cómputos quedó por arriba del 2.7 por ciento en el caso de la Elección Presidencial, y obviamente porcentajes similares en el resto de las elecciones. _____

Creo también que en algo tiene razón el Presidente del Partido Encuentro Social, es un partido político que tiene una condición sui generis después de la elección, porque tiene un esquema de representación que lo ha llevado a conformar, de acuerdo a las reglas de la Ley del Congreso de la Unión, grupos parlamentarios en ambas Cámaras, pero adicionalmente, como lo mencionó el propio Presidente y el representante de MORENA, hay un universo superior a los 100 Ayuntamientos ganados en las contiendas electorales, por parte del Partido Encuentro Social, pero será si este Acuerdo, por ejemplo, pudiese en un extremo ser ratificado por el Tribunal Electoral, entonces son grupos parlamentarios y presidencias municipales que no tienen un registro por la vía partidaria. _____

Este es un hecho inédito, es una situación, vamos, que no recuerdo que se haya presentado en el pasado inmediato en esos términos. Ha habido partidos políticos que han perdido el registro y han tenido 1 o 2 Diputados, incluso en la Asamblea Legislativa en algún momento se dio ese escenario. Y queda entonces, la discusión respecto a qué pasa con el nivel de representación y, obviamente la instancia generadora de esa representación política en las urnas, y ese es un dilema que tendrá que revisar y, en su momento, resolver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. _____

Solo acoto el punto en el cual, insisto, finalmente lo que hace esta instancia es procesar esas cifras y obviamente revisar si se cumple el extremo del 3 por ciento de la votación. Creo que, los puntos aquí señalados tanto por la representación de Encuentro Social y de MORENA, son aspectos que deben ser tomados en cuenta en la Reforma Electoral que habrá de celebrarse en algún momento; no sé si será inmediata o será después de algunos meses, pero el hecho concreto es que los temas aquí tocados me parecen constituyen una parte de la agenda en la discusión político electoral que nos pudiera llevar a una Reforma. _____

Apunto claramente, que se tiene que revisar el tema del Voto Electrónico, lo hemos manifestado en varias ocasiones, o las modalidades electrónicas para el desahogo de los trabajos en la Casilla. Efectivamente, la clasificación de los votos tendría menos discusiones si esto se hiciera desde las casillas, y los tiempos correspondientes a la obtención de resultados serían visiblemente menores, con niveles de precisión muy altos. _____

En ese sentido, acompaño esa reflexión en el sentido de impulsar esas modificaciones, al menos plantearlas en términos de la discusión parlamentaria que los partidos políticos deberán de tener. Es un Sistema Electoral que coloca cierto tipo de exigencias a los partidos políticos, pero que también nos lleva a dilemas como el que concretamente se está viviendo con los niveles de representación que alcanzó el Partido Encuentro Social, y el hecho de no alcanzar el 3 por ciento que eventualmente lo llevará a la pérdida del registro para este periodo. _____

Es todo, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. _____

Consejero Electoral Marco Antonio Baños, el representante de Encuentro Social desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted? _____

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Con gusto, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la palabra el Licenciado Hugo Eric Flores, por favor. _____

El representante suplente de Encuentro Social, Ciudadano Hugo Eric Flores Cervantes: Nosotros sí tenemos claramente cuántos votos recuperamos en estos 3 rubros que hace un momento comentaba. _____

Hay casillas que no presentaron datos, son justo las que no se contabilizaron en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), cerca del 7 por ciento. En la recuperación de votos de este gran universo de 307 mil 506 votos, correspondían a esta categoría 67 mil 512 votos. _____

Después recuperamos también votos en cotejo de las casillas que se cotejaron, ahí recuperamos 36 mil 497 votos, y el mayor número de nuestra recuperación recayó en las casillas abiertas, donde se empezó a redistribuir el voto de manera correcta, donde los votos fueron contados. _____

Tengo que decir que, definitivamente, en efecto, donde se hace la distribución es en los Cómputos Distritales, pero los votos estuvieron mal contados desde la Casilla. _____

Termino diciendo que aquí recuperamos 203 mil 840 votos, y la pregunta sería: nosotros solicitamos, cuando nos dimos cuenta de esta situación en las sesiones de cómputo, a la autoridad electoral pudieran ser abiertas esas casillas anómalas en cero. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señor representante, se le agotó el tiempo para hacer la pregunta, le pido que concluya, por favor. _____

El representante suplente de Encuentro Social, Ciudadano Hugo Eric Flores Cervantes: Y concluyo preguntándole al Consejero Electoral Marco Antonio Baños, la autoridad electoral, ¿por qué no se nos dio esa oportunidad?, cuando nos dimos cuenta que las casillas en cero, Encuentro Social estaba recuperando votos, ¿por qué no se nos dio esa oportunidad de que se recontaran esas casillas? _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias. _____
Para responder tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. _____

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Hay un detalle que es importante de mencionar. _____

Del universo total de las casillas instaladas, este Instituto a través de los Consejos Distritales, sí llegó a la apertura de poco más de casi 118 mil paquetes electorales. Usted mismo traía esta cifra. _____

Es decir, hemos abierto el 60 por ciento de los paquetes que corresponden a las casillas instaladas. _____

Creo que, el punto de comparación exacta tendría que ser entre el universo de las casillas que fueron contabilizadas en las Mesas Directivas de Casilla, con la separación

de los votos dobles o triples, y obviamente “el parangón” que éstas, o más bien, con el registro final de los votos en los Consejos Distritales, porque el 7 por ciento corresponde simplemente a un cómputo que se tuvo que hacer dado que no estuvieron en el Programa de Resultados Electorales Preliminares, pero obviamente el recuento está sujeto a causales de Ley, este es el punto central de la discusión también._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños._____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. _____

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente._____

Sin duda es un tema relevante el anterior y este que nos ocupa, pero sí quisiera tener un punto de reflexión en el Proyecto de Dictamen que estamos discutiendo._____

El primer tema de este Acuerdo es la concreción de un Sistema, no es un Acuerdo aislado, es un Acuerdo que está interconectado en varios Sistemas, todos los planteamientos que han sido formulados en la parte procedimental de este asunto que nos está tratando, y que han sido planteados por escrito por el Partido Encuentro Social, en este caso, tienen razón de ser en un Sistema._____

¿Por qué nada más los números? Porque ya se pasaron todas las etapas en la que cualquier inquietud que se tuviera respecto de los votos recibidos en casillas, respecto de los votos cuantificados o computados en las sesiones de Cómputo Distrital o en las respectivas sesiones de cómputo ya forman parte de este gran Sistema y ya fueron depurados, y para qué está ese momento, esos 2 grandes momentos anteriores, tienen que ver con el Sistema de Medios de Impugnación, ¿cuál es?, si hay alguna duda respecto del cómputo que se hace en las casillas, están los juicios respectivos para que se hagan valer, pero previamente a ello están las sesiones de Cómputos Distritales, y en esas sesiones de Cómputos Distritales están las reglas, la primera regla es que ellos van a atender esta división, precisamente, de los partidos políticos emitidos por más de 2 partidos integrantes de una Coalición._____

Es la autoridad electoral en segunda instancia la que hace esta división, y todavía para revisar ese trabajo está el Sistema de Medios de Impugnación a través de los juicios respectivos. _____

Fue un número mayor de paquetes electorales, ya se han referido en los que se realizó el recuento, por qué sobre las bases de las causales de apertura no hay otra cosa que no haya regido que las reglas previamente establecidas para llevar a cabo ese procedimiento. _____

El segundo paso fue las impugnaciones que los partidos políticos realizaron respecto de cada uno de esos trabajos, los Cómputos Distritales son los actos que se impugnan y, a partir de ellos, se derivan las pretensiones. _____

Las reglas procesales son unas, si no se atendieron están las consecuencias dentro de los propios medios de impugnación. _____

Y ¿qué es el procedimiento que estamos llevando acá, incluso es muy interesante ver cómo en la etapa anterior, a partir de los cuestionamientos de los partidos políticos, este Consejo General trató de dar la certeza para los actos que venían en posterior, y cuando no nos fue posible, porque no es posible revocar las propias determinaciones, fue la misma Sala Superior, la que dio claridad respecto a los conceptos y cómo se debían entender, a partir del planteamiento de constitucionalidad que el Partido Encuentro Social le puso sobre la mesa. Es decir, las reglas se iban estableciendo y este es el Sistema, el Sistema de Cómputos es un Sistema arropado. _____

¿Por qué ahora la pretensión del Partido Encuentro Social no puede ser atendida para tomar en cuenta todo este proceder anterior? Porque el Sistema se ha estado agotando etapa por etapa. _____

Y no es cuestión de certeza, es cuestión de dar definitividad a esas etapas, para poder dar el siguiente paso, este es el último paso. _____

Y créanme, coincido con lo que señaló el Consejero Presidente de que la pluralidad enriquece nuestra democracia, la pluralidad de los partidos políticos, ese derecho de asociación que tienen las personas, constituidas a través de los partidos políticos nos enriquece. _____

Pero, también esta una regla y es una regla definitoria, ¿qué tomamos en cuenta aquí? Los resultados, ya depurados, las fechas se agotaron, las autoridades actuaron, las cosas son de certeza y seguridad jurídica, porque la verdad de los hechos ya está definida a través de las decisiones jurisdiccionales. _____

Y este es el último paso que este Consejo General debe dar a partir de esas bases ciertas que ya son definidas. _____

Nuestro Sistema Electoral per se, es un Sistema que es complicado que tiene una interrelación, y no creo que se trate de sensibilidad de las autoridades, lo que se trata es de un diseño constitucional, de un diseño legal, para poder establecer quienes son los que participan en el Sistema de Partidos Políticos y cómo participan. _____

Este es un punto final, y quizá ojalá, atendiendo también a las propias intervenciones, efectivamente el derecho de asociación de las personas está vivo y se va a sentir y va a continuar. _____

Pero, en ese momento esta autoridad lo que tiene que hacer es, a partir de esa verdad ya establecida en nuestro Sistema, aplicar una consecuencia que fue definida por el Legislador para el Sistema de Partidos Políticos. _____

De ahí que yo coincido con la propuesta que se nos pone en el asunto anterior, y ahora sobre la mesa, conforme al procedimiento delimitado por la propia Junta General Ejecutiva. _____

Se ha manifestado aquí que hay un estado de indefensión, he leído con puntualidad las alegaciones y tiene que ver con la forma como se procede con el procedimiento que llevamos, porque no se tomó en cuenta estas cuestiones que nos plantea el representante del Partido Encuentro Social, que tiene que ver con lo que definió anteriormente la autoridad jurisdiccional, con esa depuración procesal que ya se tuvo, a través de la interconexión de los Sistemas. _____

Es la consecuencia natural que tenemos, porque ya están definidos los resultados y espero verdaderamente que este ánimo de derecho de asociación logre en algún momento volverse a constituir como partido político con la representación, que van a tener en su momento, siempre y cuando sigamos los causes que la propia normativa

nos está estableciendo y este caso es un requisito, y ya tenemos los resultados finales y definitivos, y es la única consecuencia que tengo. _____

Sería cuanto, Consejero Presidente. Gracias. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. _____

Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, el representante de Encuentro Social, desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted? _____

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Con mucho gusto.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias. _____

Es su última pregunta representante. _____

El representante suplente de Encuentro Social, Ciudadano Hugo Eric Flores Cervantes: Desde luego, que entiendo que esto está sujeto a procedimientos. _____

Y por eso es que hemos venido sosteniendo el principio de definitividad versus principios de exhaustividad. _____

Me parece que ha sido muy puntual su exposición Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, solo le quisiera hacer una pregunta: ¿está usted completamente segura que la autoridad electoral en este caso hizo honor al principio de exhaustividad de todos los requerimientos que le vinimos haciendo a lo largo de todo este Proceso? _____

Ésa sería mi pregunta. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para responder, tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. _____

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente. _____

De acuerdo con las constancias, las solicitudes que nos han puesto sobre la mesa como autoridad, se les ha dado una respuesta en los momentos oportunos, por este Consejo General han pasado varias respuestas. _____

Si se refiere usted a las últimas preguntas en las cuales dieron en el disco compacto la información, me parece que ése es un tema anterior, lo que nosotros ya estamos

tomando en cuenta aquí son los resultados definitivos que tenemos de la depuración de los medios de impugnación. _____

Estoy convencida que puntualmente les hemos entregado, en particular al Partido Encuentro Social, desde las Comisiones y concretadas en este Consejo General, los datos, las interpretaciones, las perspectivas que nos han solicitado, los hemos construido en un acto de autoridad precisamente para darles certeza a ustedes y que tuvieran, en su momento, la oportunidad de impugnar en caso de que no coincidieran con la interpretación de este órgano. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Benito Nacif. _____

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, Consejero Presidente. _____

Este Consejo General en cumplimiento con las atribuciones del Instituto Nacional Electoral está conociendo los Acuerdos para la cancelación del registro de 2 partidos políticos: el Partido Nueva Alianza, que se discutió en el punto anterior; y el Partido Encuentro Social, después de casi 2 meses, y casi 2 meses y medio de celebrada la Elección Federal. _____

Durante esos 2 meses y medio, nuestro Sistema de Instituciones Electorales ha dado la oportunidad a los partidos políticos de revisar todo lo ocurrido el día de la Jornada Electoral, a la luz de las disposiciones legales, es un Sistema que permite a los partidos políticos y a los ciudadanos, en diferentes momentos, aclarar todas y cada una de las dudas legalmente fundadas respecto al resultado de la Elección. _____

Ciertamente nuestro Sistema no es perfecto, ninguno lo es, lo que nuestro Sistema tiene es que es un Sistema muy fiable, porque ofrece un conjunto de garantías a los partidos políticos para que presenten sus alegatos y se revisen los cómputos, el Escrutinio y Cómputo celebrado el día de la Jornada Electoral por los ciudadanos. _____

No estamos aquí conociendo nada más el resultado plasmado por los ciudadanos en las actas la noche de la Elección, estamos conociendo todo lo que ocurrió incluso

después de eso. Para empezar, esas actas que reflejan el Escrutinio y Cómputo celebrado en las casillas por los Funcionarios de Casilla, se hicieron bajo la observación de los representantes de los partidos políticos, probablemente Encuentro Social o Nueva Alianza no tuvieron una cobertura cercana al 100 por ciento, pero sus coaligados estuvieron presentes en casi la totalidad de las casillas vigilando el Escrutinio y Cómputo y el llenado de las actas._____

Eso es una primera garantía importante._____

Tuvimos un grado de cobertura del 100 por ciento de representantes de partidos políticos en las casillas el día de la Jornada Electoral, con posterioridad nuestro Sistema permite que los partidos políticos independientemente de la cobertura que tuvieron de Representantes de Casilla en los Cómputos Distritales puedan presentar alegatos para la apertura de paquetes._____

En esta ocasión se aperturó, se abrió y se recontó un porcentaje inédito de paquetes de las casillas electorales, se volvieron a contar los votos, se volvieron a llenar las actas. Nuestro Sistema no está diseñado para que la pérdida del registro se dé por el incumplimiento de un número absoluto de votos, está diseñado como un porcentaje que se calcula dividiendo la votación obtenida por los partidos políticos entre la votación válida emitida y lo que hemos descubierto y nos arroja la experiencia es que las aperturas, los recuentos, no solamente hacen que se mueva el número de votos de los partidos políticos sino también se mueva la base sobre la cual se calcula ese porcentaje y como resultado de eso el porcentaje de los partidos políticos prácticamente no tiene un movimiento entre las actas llenadas en Casilla y los Cómputos Distritales, ¿por qué? Porque se demuestra lo que hemos visto una y otra vez que el error se distribuye aleatoriamente y que en el agregado afecta a todos por igual, pero no sólo existe la garantía de los Cómputos Distritales, además, si las inconformidades de los partidos políticos persisten, existe una siguiente etapa en la cual pueden presentarlas ante una autoridad distinta, ya no el Instituto Nacional Electoral sino una autoridad no directamente involucrada en los cómputos previos, que es el Tribunal Electoral y

pueden ahí solicitar que se abran paquetes que no se abrieron antes y se vuelvan a contar. _____

Estamos hoy en día, después de que todo ese proceso tuvo lugar y esta autoridad electoral conoció lo que se llaman los cómputos definitivos y tras conocer los cómputos definitivos, habiéndose agotado todas estas garantías que los partidos políticos tienen nos encontramos ante el mismo escenario que conocíamos meses atrás y es que el umbral definido de manera relativa como un porcentaje de la votación creció tanto en los recuentos, como creció los votos recuperados por los partidos políticos. _____

Las garantías se han dado, nuestro Sistema, insisto, no es perfecto, pero es muy fiable. Y esa es la confianza que tenemos porque está diseñado de esa manera nuestro Sistema. _____

En lo particular, soy muy respetuoso del derecho que tienen los partidos políticos, de recurrir y pedir recuentos adicionales a los que ya se hicieron, pero creo que los porcentajes de recuento que tenemos, la experiencia muestra, que el trabajo que empezaron los ciudadanos y que después fue revisado, ha sido un trabajo muy confiable, y por esa razón Consejero Presidente, estoy de acuerdo con el Proyecto que ahora nos presenta la Junta General Ejecutiva. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. _____

Permítanme intervenir en este punto. _____

Para reaccionar, sin un ánimo de una polémica interna, pero sí para reaccionar expresando el punto de vista no solamente de la Junta General Ejecutiva, que tengo en virtud de mi mandato el privilegio de presidir, sino también desde el punto de vista de la autoridad electoral, y de manera complementaria a lo que ya han señalado, los Consejeros Electorales Marco Antonio Baños, Claudia Zavala, y ahora el Consejero Electoral Benito Nacif. _____

El argumento fundamental que la representación de Encuentro Social está poniendo sobre la mesa y que coincide con el que Encuentro Social le planteó a la Junta General Ejecutiva en ejercicio de su derecho de audiencia, y que presenta como una serie de

pruebas, y que coincide con lo que como han señalado, se nos presentó a distintos Consejeros Electorales en audiencias, en reuniones que fueron solicitadas por la dirigencia del partido, y que coincide con las impugnaciones que fueron presentadas a las sesiones de Cómputo Distrital ante el Tribunal Electoral de manera esencial, y que se resume, lo ha hecho usted mejor que yo, pero que se resume en el hecho de que ha habido un error de cómputo en la distribución, en la asignación de los votos que tenían 2 o más marcas derivados de la Coalición, y que tienen una distribución fijada por la propia Ley, creo que es pertinente hacer las siguientes reflexiones:_____

Nos dice, en primer lugar, ya lo señalaba el Consejero Electoral Benito Nacif, Encuentro Social tuvo la oportunidad, marcada por la Ley, de registrar representantes ante las Mesas Directivas de Casilla, y que se trata de figuras que tienen la finalidad, precisamente, de vigilar que lo que los ciudadanos, funcionarios de las mismas, asienten en las distintas actas y el mismo proceso de cómputo de los votos, ocurra conforme a la Ley, y en caso contrario presentar los escritos de protesta necesarios. __ Pero, agrego un punto adicional, y en efecto decía el Consejero Electoral Benito Nacif, Encuentro Social no tuvo presencia en todas las Mesas Directivas de Casilla, pero bueno, la Coalición, los partidos políticos coaligados, ahí sí tuvo una presencia masiva. Voy más allá, porque no podríamos pretender que los coaligados, los representantes de los partidos políticos coaligados representaran los intereses de Encuentro Social. __ Sin embargo, en las sesiones de Cómputo Distrital, que es justamente en donde se hace la asignación de aquellos votos en donde el ciudadano optó por 2 o más partidos políticos coaligados, Encuentro Social tuvo presencia en las 300 sesiones de cómputo, y ese era el momento en donde sus representantes pudieron y debieron haber hecho un argumento en el sentido de un eventual cómputo equivocado, asentado justamente en las actas de Cómputo Distrital._____

Nos dice el Licenciado Erik Flores aquí, es que esta autoridad, tendría que privilegiar la exhaustividad con el principio de definitividad, o no hacer validez ser el primero respecto del segundo._____

Quisiera poner sobre la mesa un punto, el principio de exhaustividad también está ceñido a un principio de oportunidad procesal, y por un principio de legalidad._____

Déjenme ponerlo al revés, esta autoridad no puede estar en el momento en el que se le ha solicitado, por algún partido político, realizando, revisando de nueva cuenta los cómputos que la misma autoridad realizó, es más, una vez realizados los Cómputos Distritales y asentados en las actas no hay ninguna instancia del Instituto Nacional Electoral que pueda mandar una revisión de esos cómputos, de esas asignaciones._ La única vía jurídica posible para que pueda revisarse esa asignación es si lo mandata alguna sala del Tribunal Electoral, y en efecto, Encuentro Social tuvo la posibilidad, y de hecho la ejerció de impugnar masivamente los Cómputos Distritales, alegando justamente lo que hoy se está poniendo sobre la mesa, y lo hizo de manera extemporánea._____

Esa fue la razón por la que el Tribunal Electoral, la Sala Superior rechazó masivamente los argumentos planteados, los juicios de, recursos presentados por el Partido Encuentro Social._____

Encuentro Social nos pidió a la Junta General Ejecutiva, en un momento procesal, que ya no era oportuno, es decir, en el momento que se están haciendo la declaratoria de pérdida de registro, revisando el cumplimiento de los requisitos, o las condiciones que eventualmente llevan a la pérdida de un registro, que volviéramos a hacer ese cómputo. Cuando eso era un asunto material y jurídicamente, absolutamente cerrado, cerrado no solamente por las instancias competentes para realizar ese cálculo del Instituto Nacional Electoral, que son los Consejos Distritales, sino cerrado también por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación._____

En pocas palabras, lo que Encuentro Social nos está pidiendo, primero la Junta General Ejecutiva, y ahora este Consejo General, es que hagamos algo que no tiene competencia para ser, porque es un asunto jurídicamente cerrado, y el principio de exhaustividad que se alega no puede evidentemente estar contrapuesto, olvidémonos del principio de definitividad, no puede estar contra puesto con el principio de oportunidad procesal, como decía, ni con el principio de legalidad._____

Esta autoridad no puede revisar actos que ya tienen una definitividad jurídica, una definitividad procesal, sin violentar directamente la Constitución Federal de la República.

Por otra parte, se nos fue, digo, me permito poner sobre la mesa un argumento adicional, si hubo un alegato, si hubo una impugnación presentada de manera extemporánea, que fue lo que llevó al desechamiento de los recursos presentados por el partido político, y hoy es el partido político es el que nos pide que realicemos, que no se haya valorado, que no se haya realizado, desahogado, digamos, ese cómputo como prueba fundamental de los alegatos presentados ante la notificación de la Junta General Ejecutiva, me parece que lo que se está pretendiendo es obtener un beneficio de un error que no le corresponde a esta autoridad electoral, sino al propio partido.

Si el partido impugnó a destiempo, y eso fue causa de un desechamiento por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral de los recursos que presentó, eso es un asunto, digámoslo así, que el partido político, del que el partido político, lo digo sin ningún ánimo de confrontación, del que el partido político debe hacerse responsable, si alguien impugna a destiempo y eso es causa de que sea desechado el recurso, pues no es un asunto que compete a esta propia autoridad electoral.

Pero, vuelvo al punto, y con esto quiero cerrar: no se trata, y esto quiero decirlo, esta autoridad ha actuado desde este punto de vista, con estricto apego a la legalidad, creo que si hay algún argumento de los que se han puesto sobre la mesa, que viene a reforzar los alegatos del Dictamen que se nos ha planteado, creo que hay que incorporarlo, precisamente para darle la mayor robustez en términos de su motivación. Pero, termino, insisto, como lo señalaba en el punto anterior, esta autoridad actúa sin filias y sin fobias, y sin duda, lo digo así, no creo que sea una buena noticia para el Sistema de Partidos Políticos que un partido político salga del mismo. Pero, la lógica en una democracia, vuelvo a decirlo, es que las puertas del Sistema de Partidos deben estar abiertas tanto para que alternativas que representen la pluralidad política, alternativas políticas que tienen un mínimo de representatividad fijada por la Ley puedan acceder al mismo, pero también son los propios partidos políticos los que

deciden con su voto cuando una opción política debe salir. Sin ningún ánimo, insisto, ninguna filia, ninguna fobia por parte de esta autoridad electoral._____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Favela._____

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejero Presidente._____

También estoy de acuerdo con el sentido de este Proyecto de Dictamen, obviamente en el Proyecto tanto de Nueva Alianza como de Encuentro Social, están basados en resultados que ya tienen la calidad de definitivos e inatacables porque ya fueron determinados por esta autoridad, o sea, por el Instituto Nacional Electoral en una primera instancia, y después fueron modificados o confirmados en algunos casos por las sentencias que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de sus diversas salas que lo conforman, ya sea en los juicios de inconformidad, ya en los recursos de reconsideración._____

Entonces, creo que aquí tenemos que tener claro que estos Proyectos, estos documentos donde se está proponiendo la cancelación del registro es porque ya se tienen estos resultados que son definitivos, ya son inamovibles, y simplemente lo que nosotros estamos haciendo es verificar si cumplen o no con el 3 por ciento de la votación que exige la Legislación para mantener el registro sí o no._____

Que es una lástima que 2 partidos políticos pierdan el registro; sí, sí lo es, pero eso fue lo que la ciudadanía decidió al momento de emitir su voto en las urnas._____

Ahora, sí les decía que estoy de acuerdo con el sentido del Proyecto de Dictamen, pero me parece que efectivamente, como lo hace notar en la propuesta de engrose Encuentro Social, falta pronunciarse sobre varios aspectos, primero la valoración de las pruebas, Encuentro Social están ofreciendo 19 pruebas con distintas características. En el Proyecto de Dictamen sí se hace una referencia, una transcripción a las mismas pero no se hace una valoración propiamente dicha. _____

Y podría decir que realmente estas pruebas, no sirven para acreditar lo que estamos ahora investigando qué si cumple o no con el 3 por ciento de la votación que exige la Constitución Política y la Ley para mantener el registro._____

¿Cuáles son esas pruebas? La 1, la 2, 3 y 4, que están señaladas en el escrito de Encuentro Social con pruebas documentales que tienen que ver con actas de los cómputos, de las aperturas de los paquetes electorales de las distintas elecciones, y como lo dije ya, estos resultados ya quedaron definitivos, y también está ofreciendo como prueba 5 las sentencias relacionadas con los juicios de inconformidad y recursos de reconsideración._____

Y hay que recordar que estos resultados que nosotros estamos plasmando en este Proyecto de Dictamen ya son definitivos, ya los valoró, ya los avaló la propia Sala Superior del Tribunal Electoral y las distintas Salas Regionales, y esa tendría que ser la respuesta a la valoración de esas pruebas, que se acredita lo que en ellas contiene, pero que realmente en su conjunto, resultado de la votación es tal y este Partido Político no alcanza el 3 por ciento._____

Está también ofreciendo una prueba técnica que sería una base de datos de resultados definitivos y firmes, pues precisamente con base en esa base de datos es que se está haciendo esta, estos resultados que se están tomando ahora en cuenta, hay una pericial en mercadotecnia política, creo que esa no se puede admitir porque ni siquiera están ofreciendo el nombre de un perito, pero además esto para qué serviría para dilucidar lo que estamos aquí resolviendo, es cumple o no cumple con el 3 por ciento de la votación válida emitida que exige la Ley para conservar el registro, si no lo cumple, esa prueba pericial en mercadotecnia política creo que ningún efecto útil tendría que se admitiera porque no nos lleva a dilucidar este tema._____

También hay otras pruebas que son la 8, la 9 y la 10, que tienen que ver con notas de prensa, videos, entrevistas del Consejero Presidente cuando se lanzó a aquella campaña de que había que votar de manera sencilla, creo que por sí mismo tampoco tiene nada que ver con que si se alcanza o no el 3 por ciento de la votación, se puede valorar y lo podríamos decir así en el documento pero que no tienen realmente ningún objeto útil para dilucidar lo que se está tratando de verificar._____

Actas de Escrutinio y Cómputo y de casillas sería la misma circunstancia, los informes de fiscalización o el Reglamento del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social,

o los informes acerca de la transmisión de spots que dicen ellos es que a través de esos informes se verifica o se acredita que casi todos los tiempos en radio y televisión estuvieron destinados a difundir la campaña a la Presidencia de la República, bueno, esa es una estrategia que el partido político decidió y eso no tiene nada que ver en sí con si alcanzó o no el 3 por ciento de la votación._____

Y así están otras pruebas hasta las copias de un libro y la presuncional y la instrumental de actuaciones, creo que sí falta pronunciarnos sobre estas pruebas y qué efecto tendrían, qué acreditarían en el caso concreto y opino que desde la valoración individual y en su conjunto no acreditan que el partido político alcance el 3 por ciento._____

También están formulando una serie de cuestionamientos en las páginas que ustedes señalan, 109, 110 y 111 y creo que también ahí faltaría una respuesta más directa y más contundente, pero también lo que diría es, sí, se da un fenómeno peculiar, porque finalmente es un partido, Encuentro Social en este caso concreto que tiene un número importante de diputaciones en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin embargo no tiene el porcentaje de votación suficiente para conservar su registro, pero la hipótesis legal a la que nosotros estamos haciendo referencia solamente habla de una cuestión meramente cuantitativa, alcanzas o no el 3 por ciento de la votación, ¿no la alcanzas? Entonces, con eso se acredita la hipótesis legal y procedería la cancelación del registro._____

Y a todas las demás cuestiones sí creo que nos llaman a la reflexión, que bueno que las plantean pero realmente nosotros como autoridad electoral tenemos que aplicar lo que dice la Ley verificando los resultados electorales y el porcentaje de votación que obtuvo cada uno de los partidos políticos con independencia de las distintas situaciones que se hayan dado._____

Si estamos viendo estas nuevas circunstancias, creo que serían tema de una reflexión, sería tema también de, inclusive llevarlo a formar parte de alguna Reforma Electoral, pero ahora, con lo que tenemos vigente nos están hablando de una cuestión de un mínimo de votación que se tiene que tener en alguna de las Elecciones Federales y en el caso concreto tanto Encuentro Social como Nueva Alianza no cumplen con ese 3 por

ciento y por eso es la cancelación del registro, entonces sí pediría un engrose, pero llegaría exactamente a los mismos términos y sí, siendo un poco más específico con las pruebas porque me imagino que si no la hacemos, también como lo está anunciando Encuentro Social, pues esas deficiencias van a ser motivo de una impugnación y podemos correr el riesgo de que el Tribunal Electoral nos lo regrese para mayor exhaustividad, claro, pensando que su criterio sea otro y no vayan a empezar con que no fuimos exhaustivos y por lo tanto, hay que conservar el registro, de los partidos políticos._____

Gracias._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Adriana Favela._____

Consejera, desea hacer una pregunta la Consejera Electoral Dania Ravel, ¿La acepta?

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Sí, claro.____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Consejera Electoral Dania Ravel._____

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: A ver, únicamente para entender muy bien su propuesta de valoración de todas las pruebas que presentó el Partido Encuentro Social, el Proyecto de Dictamen menciona que deben de desecharse todas y cada una de las pruebas ofrecidas por el partido político afectado, en virtud de que los documentos que exhibe, así como los que solicita, constituyen pruebas que deberían ser solicitadas y presentadas en el momento procesal oportuno a través del juicio de inconformidad o recurso de inconformidad correspondiente, incluso menciona que no se trata de pruebas supervenientes, por lo tanto, no podrían admitirse._____

No me queda muy claro cuál sería la finalidad de analizar pormenorizadamente cada una de las pruebas porque me parece que realmente esta conclusión engloba a lo que va a llegar el análisis individualizado de cada una de las pruebas, entonces nada más para entender un poco su propuesta y saber si no quedaría solventado con este pronunciamiento que ya hace el Proyecto de Dictamen._____

Gracias, Consejero._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para responder tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Favela._____

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Consejera._____

No, para mí no sería suficiente porque, primero están diciendo que deben desecharse todas y cada una de las pruebas, pero a ver, aquí tenemos que tener en claro algo, la Junta General Ejecutiva aprobó unos Proyectos de Dictamen el día 3 de septiembre y se les dio vista a los partidos políticos para que alegaran, lo que a su derecho conviniera, les estamos garantizando su derecho de audiencia._____

En ese derecho de audiencia ellos pueden alegar lo que estimen pertinente y también pueden ofrecer pruebas, ahora, esas pruebas las están ofreciendo aquí, entonces, estas pruebas las vamos a admitir sí o no, y además qué valoración le tenemos que dar, entonces tampoco estoy de acuerdo con que diga aquí, más adelante en la página 29 que han sido desechadas por haber sido presentadas de manera extemporánea, el partido político los presentó oportunamente dentro de los 3 días que tenía para contestar._____

Gracias._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral._____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama._____

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente._____

Primero una consideración política sin pluralismo no hay democracia, la democracia es el régimen que reconoce la pluralidad frente al autoritarismo que pretende que sólo hay una visión de la sociedad, que hay un pueblo homogéneo, monolítico y que por tanto quien no se apegas al dictado de quien está en el poder es ilegítimo en ese régimen, el régimen autoritario, ¿verdad?, que excluye la pluralidad y a las oposiciones, la democracia hace de la pluralidad virtud, y condición indispensable para su

reproducción, por lo tanto, la llegada de nuevas opciones políticas al Sistema de Partidos Políticos es una condición indispensable para la reproducción de la vida democrática. _____

Desde ese punto de vista, México tiene un régimen que permite la formación de partidos políticos con una deficiencia, coincido con el Consejero Presidente, que es que hay una restricción a una garantía fundamental de libres asociaciones, que prohíbe que cada Proceso Electoral puedan ponerse en juego nuevas opciones políticas, y lo restringió a cada 6 años. _____

Pero, abierto el juego, no hay un número óptimo de partidos políticos. _____

¿Cuántos partidos políticos habrá?, lo deciden los ciudadanos, bien organizándose y cumpliendo con los requisitos legales para llegar por primera vez a la boleta, o bien, obteniendo el porcentaje mínimo de votos. _____

Nosotros damos por bienvenida la llegada de partidos políticos cuando cumplen los requisitos sin una condescendencia por parte del Instituto Nacional Electoral, y sin ningún obstáculo. Así lo hicimos con Encuentro Social, con el Partido Humanista y con MORENA. _____

Y ni hablar, decimos adiós o hasta pronto, si quieren así también, cuando de los resultados de una votación no encontramos los elementos para que siga adelante un partido político porque no alcanzó el 3 por ciento. _____

Peor frente a cada partido político, somos equidistantes y como autoridad no vemos partidos políticos grandes o chicos, pretendidamente hegemónicos o marginales, nosotros somos imparciales, y nuestra obligación en el régimen constitucional mexicano, es ser autónomos, independientes e imparciales, frente a las agendas de posible Reforma eso encontrarán, una autoridad autónoma, independiente e imparcial, que ha sido lo que ha garantizado la posibilidad de que las minorías se vuelvan mayorías, y que los cambios en el Sistema Político estén abiertos. _____

Ahora, me voy al tema concreto, se dice que hubo un mal conteo de votos y que por eso pierde el registro Encuentro Social. Nosotros decimos que han sido los ciudadanos votando los que determinan quién sale, y aquí se nos contrapone diciendo: “han sido

los ciudadanos contando, equivocándose, los que nos colocan fuera del Sistema de Partidos Políticos”.

Voy a decir por qué creo que no. No es cierto que se hayan recuperado 307 mil 306 votos entre el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y cómputos, lo que pasa es que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) no contó todos los votos, no es que se hayan perdido, es que todos los partidos políticos, y los candidatos independientes, tuvieron más votos cuando se consideró el 100 por ciento de las actas, porque al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) se capturaron 93.5, pero se contabilizaron solo el 80.29 por ciento, es decir, en la Elección Presidencial, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) incluyó 45 millones y medio de votos, cuando los cómputos incorporaron casi 55 millones de votos. Hay una diferencia de 9 millones 400 mil votos entre el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y el Cómputo, todos subieron incluido, por supuesto, Encuentro Social en 307 mil 306 votos, pero subió MORENA en 4 millones 957 mil votos, el Partido Acción Nacional en 1 millón 865 mil votos, el Partido Revolucionario Institucional en 1 millón 520 mil, es decir, los números es el mismo comportamiento, no hubo ningún sesgo en contra de Encuentro Social al realizar el Cómputo. Además, todos los partidos políticos fueron en Coalición.

Los 9 partidos políticos se integraron en 3 coaliciones, cuando hubo voto en común si no se hubiese sabido contar, se había afectado a todos, todos los votos fueron bien contados incluyendo Encuentro Social, que no presentó ninguna dificultad, respecto a los demás, su Coalición era de 3.

¿Cómo les fue a los partidos políticos de su Coalición entre el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y el cómputo, para ver si hubo algún sesgo o alteración? El Partido del Trabajo tuvo 26.97 por ciento más votos, MORENA 24.51 por ciento, Encuentro Social 25.13 por ciento, es decir, el mismo comportamiento.

Y ello lo encontramos en todos los demás partidos políticos, y se nos dice es que la mayoría de los votos de diferencia entre Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y Cómputo, los identificamos en las casillas que se fueron a

recuento, sí, porque 3 de cada 4 casillas se fueron a recuento, entonces las casillas que no estaban consideradas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y que sí están consideradas en Cómputo, en 3 de cada 4 casos, tuvieron recuento, y entonces subieron los votos de todos, absolutamente de todos los contendientes. ____ Y al final, ¿qué ocurrió?, que frente al resultado del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que era 2.68 por ciento, pasó a 2.78 por ciento, es decir, al incluir 9 millones 400 mil votos adicional, la variación de Encuentro Social fue de una décima, no pasó nada, es decir, no había habido un mal Cómputo, un mal Escrutinio. ____ Con ello, finalmente nos quedamos con un porcentaje de 2.78 por ciento, a 168 mil votos. Pero, ya estando los Cómputos definitivos ni modo que le hagamos como el Tribunal Electoral con el Bronco, andaba cerca, te la damos por buena, 2.78 no es 3 por ciento. ____

Entonces esta autoridad que es muy legalista y además se apega al principio de objetividad, 2.78 no es 3, y por eso estamos declarando lo que declaramos. ____

Hay espacios de mejora, para evitar problemas en los cómputos, yo coincidí con usted, urna electrónica, voto electrónico y, por supuesto, quitar este barroquismo churrigueresco, donde se vale votar por varios partidos políticos en la misma boleta y luego se empieza a hacer fraccionamiento de votos. ____

Creo que, esa es una contribución de nuestro Legislador que podía quedar en la historia. ____

Gracias, Consejero Presidente. ____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama. ____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. ____

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero Presidente. ____

Tengo un planteamiento y, en consecuencia, una propuesta. ____

Estimo que este punto, concretamente, el Proyecto de Dictamen, tendría que contener un anexo que señalara con precisión de qué forma se llegó al resultado definitivo con

el que se sostiene, en efecto, que no se cumplió con el 3 por ciento de la votación válida emitida._____

Se observa en lo remitido por la Junta General Ejecutiva, un punto que dice: "Resultados del Proceso Electoral", se dice que el Tribunal Electoral concluyó la Resolución de los medios, y luego se dice en el inciso VII) que la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral remitió los resultados a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, de las Elecciones Federales de Presidentes, Senadurías y Diputaciones. Se reproducen tablas tal cual de los resultados._____

Pero, estimo que un documento de esta naturaleza, dada la trascendencia que está de por medio, de la pérdida de registro de partidos políticos, debiera de contar, cumpliendo con el principio de certeza y de máxima publicidad, con un documento, un apartado que diera cuenta de la metodología de cómo se llegó a establecer que ese 3 por ciento, e incluso que se remitiera a la base de datos de donde provienen todas estas afirmaciones de resultados._____

Solo me parece que se está, de forma sintética sosteniendo, como si fuese un resumen ejecutivo de un Dictamen, pero no el Dictamen mismo, sí creo que debiera tenerse un anexo que mostrara, paso a paso la conclusión que aquí se sostiene. En suma, incluso ya dando cuenta de los resultados concretos, modificaciones, en su caso, que hubo de los fines, de ahí que sostenía por la necesidad de una base de datos que acompaña, que remitiera estos Proyectos._____

Es cuanto, Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña._____

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Hugo Eric Flores, representante de Encuentro Social._____

El representante suplente de Encuentro Social, Ciudadano Hugo Eric Flores Cervantes: Gracias, Consejero Presidente._____

En el Proyecto de Dictamen que hoy se presenta, nos llama la atención poderosamente que en el punto 12 de los antecedentes, hacen poca mención a que nosotros ejercimos

nuestro derecho de audiencia por escrito, para después decirnos que se nos negó el derecho de audiencia en otro oficio porque lo presentamos extemporáneo, y aquí nos parece que la autoridad electoral simple y sencillamente se está equivocando, porque nosotros presentamos nuestro derecho de audiencia en los términos que marca la Ley, 09:25 de la mañana del día 6 de septiembre pasado, se nos vencía a las 10:20 horas, como bien señala, lo presentamos en tiempo y forma. _____

Y después dice, se les niega el derecho a audiencia en los siguientes párrafos por un oficio que suscribió nuestro representante ante la autoridad electoral, donde pedíamos una audiencia con el Secretario Ejecutivo, para decirle que a pesar que desde el 17 de agosto le habíamos solicitado información, que era sumamente importante para nosotros, para el armado de nuestra defensa legal. _____

Desde el 17 de agosto no había habido respuesta, nos dieron respuesta en un oficio fechado el 6 de septiembre, aunque entregado el 7 de septiembre, por cierto, y se nos dice: “no, ya no hay derecho de audiencia”, lo que nosotros queríamos decir es no se nos ha entregado esa información, esa información se nos entregó el 7 de septiembre. Y bueno, la declaratoria que hace la Junta Directiva dice inmediatamente después: “otra vez no valoran nuestras pruebas, se nos entrega información insuficiente”. En la propia audiencia constitucional planteamos una serie de preguntas, que nosotros estamos preguntando a la autoridad electoral, porque en eso está basada nuestra defensa, nosotros seguimos insistiendo, bueno está muy bien, momentos oportunos, procesales, todo eso es correcto. _____

Por eso estamos armando nuestra defensa, porque hasta estos momentos la autoridad electoral con los propios datos no nos ha podido demostrar que no llegamos al 3 por ciento, por más que aquí se nos esté diciendo: “ya hay una sentencia, ya hay esto”, bueno, hay presunciones que nosotros tenemos. _____

Decía hace un minuto el Consejero Electoral Ciro Murayama que, sí, que todos los partidos políticos aumentamos, nada más que nosotros aumentamos justo en este voto que se empezó a distribuir de manera legal y justa en las casillas que se aperturaron, ahí es cuando, justamente, nosotros empezamos a recuperar y somos el partido político

que más recupera, por cierto, después de nosotros el Partido del Trabajo, porque tenían el mismo efecto, de que la votación había sido contabilizada a MORENA. _____

Nos damos cuenta cuando se empiezan a abrir las urnas, y es justo en ese momento en que nosotros le solicitamos a la autoridad electoral en las sesiones de Cómputo, no después, en el transcurso de las sesiones de Cómputo que se revisaran las casillas en cero, o donde se presentara la votación anómala, 0,1, 2, de Encuentro Social, porque en todas empezamos a sacar votación, ese gran tramo es donde nosotros adquirimos nuevos votos, y donde le sumamos a nuestra causa. _____

Le quisiera solicitar a la autoridad, si pudiera haber un engrose para explicar bien el punto 12, porque me parece que no es correcto lo que aquí se está señalando, y, además, desde luego que me da mucho gusto que las expresiones aquí externadas por los propios Consejeros Electorales se anexasen también como un engrose de este Dictamen. _____

Por su atención, gracias. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor representante. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. _____

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente. _____

Para esta parte de la propuesta que hizo la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, quizá lo que procede es ampliar, obviamente, la parte donde se está refiriendo que se hizo el desechamiento de las pruebas, como mencionó la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, pero me parece que las pruebas sí deben de formar parte del expediente correspondiente. _____

Entonces, pediría que se agreguen esas pruebas como parte anexa, porque supongo que el Partido Encuentro Social está teniendo una deliberación rumbo a una posible impugnación, esa impresión tengo, no lo sé con certeza, pero creo que las pruebas deberían de aparecer en algún lado, y sí ampliar un poco la parte de argumentos que llevó a la Junta General Ejecutiva a establecer esta circunstancia, por lo demás me

parece que la única evolución de datos disponibles sobre este tema tiene que ver con los resultados que ofrecimos en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), ya decía el Consejero Electoral Ciro Murayama, tuvimos poco más del 93 por ciento de las actas que fueron consideradas al cierre de Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), incluso hasta la parte de la ampliación de la hora adicional de captura del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y las propias pantallas del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) establecieron con claridad que se trataba del 80 por ciento de captura en las actas, entonces, creo que esa parte está ahí ya con claridad._____

La otra cuestión son los resultados que ofrecen los Cómputos Distritales y obviamente los cuadros aparecen igual en el Proyecto de Dictamen, entonces, yo en esa parte creo que está completo el expediente, pero me da la impresión de que sólo 2 detalles; uno como para atender la propuesta de la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, de fortalecer las reflexiones de la Junta General Ejecutiva que los llevaron a esta parte y luego en el expediente del acuerdo sí agregar todas las pruebas y los términos que fueron presentadas por el Partido Encuentro Social y me parece que eso es lo que complementaría la documentación con relación a este tema._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños._____

Me permite una pregunta._____

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Con gusto, Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias._____

Simple y sencillamente para poder atender y sin necesidad de intervenir y aprovechar y escuchar su punto de vista._____

Me parece que lo que planteaba el Consejero Electoral José Roberto Ruiz hoy ya está, hay una base de datos, hay acceso a través de Internet, en el sitio del propio Instituto, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, ha venido construyendo esa base de datos y la ha venido modificando a la luz de cada una de las sentencias, entonces,

digamos, estaría para atender al planteamiento digamos de mayores elementos en la propia Resolución, de acuerdo en que este punto eventualmente se pudiera atender colocando un link en la Resolución que remite a eso, que es una base abierta y que insisto, son los datos finales de donde la Junta General Ejecutiva tomó las cifras que están plasmadas en el Dictamen que elevó la consideración del Consejo General._____

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente, le agradezco la pregunta pero, sí efectivamente creo que hay razón en plantearlo así es una fórmula adecuada para que se tenga todo el detalle de la parte de los resultados en términos de la preocupación que planteó el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, me sumaría a esa posibilidad de tratamiento en el documento y con eso me parece que estaríamos atendiendo las diversas preocupaciones que se expresaron aquí en la mesa._____

Ahora, es un hecho que en esa base está toda la información correspondiente, vaciarla ya de manera impresa en el Proyecto la verdad es que sería en mi opinión innecesario dado que el link nos permitiría llegar a esa información desagregada para los efectos que se necesiten en la revisión._____

Es todo, Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias.____
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Enrique Andrade._____

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Consejero Presidente. _____

De manera muy breve, sólo para hacer algún comentario por la trascendencia de estos acuerdos que estamos conociendo en estos momentos, como se ha dicho y ya para no repetir, creo que este Acuerdo es una consecuencia de hechos y decisiones que se han venido dando desde, en efecto, el día de la Jornada Electoral decisiones de esta autoridad y decisiones de la Sala Superior, creo que por eso es un recuento justamente de estos hechos de las hipótesis que han resuelto cada una de las autoridades que le compete estar en este momento como antecedentes de este Acuerdo._____

Creo que, desde luego, falta una ruta jurídica como se ha dicho, y en ese sentido, habrá que esperar la decisión final de la Sala Superior desde luego nosotros estaremos pendientes y, en su momento, acataremos lo que se resuelva por parte de la Sala Superior, coincido con lo que ha dicho la Consejera Electoral Adriana Favela, es necesario sí hacer un recuento de las últimas pruebas presentadas y, cada una de ellas, hacer el comentario que corresponda, en el sentido de si se deshecha o no se deshecha, si aporta o no aporta algo, en fin, creo que es importante sí que se agote esta valoración justamente para que se cumpla con el derecho a la defensa adecuada. Más que otra cosa quería aprovechar para agradecer la presencia en este Consejo General, tanto del Partido Nueva Alianza como del Partido Encuentro Social, me tocó en estos años ver su participación de ambos partidos políticos, la mirada con la que tuvieron en varias discusiones, sus aportaciones que desde luego se agradecen para la democracia en el país, y bueno desearles la mejor de las suertes, seguramente estarán nuevamente en este Consejo General representando la voces que ustedes han representado hasta ahora, y de verdad por mi parte, muchas gracias._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade._____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Claudia Zavala._____

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente._____

Solo para señalar que también estoy de acuerdo en que se haga la valoración respectiva de las pruebas para que se puedan atender, llego a la misma conclusión, tal como lo ha expuesto la Consejera Electoral Adriana Favela, pero sí que quede de manifiesto que se toman en cuenta por la garantía que le requiere toda vez que fue presentado su escrito en tiempo y ahí vienen las pruebas, sin embargo mi conclusión no cambiaría en este sentido, llegaría a la misma conclusión interpretativa y, por supuesto, la consolidación de los datos que se encuentran en el Sistema, que por cierto, es documentación pública que está en nuestra página._____

También resaltando que en todo momento esa información estuvo, es pública y sigue siendo pública. _____

Sería cuanto, Consejero Presidente, gracias. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala. _____

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eric Flores, representante Encuentro Social. __

El representante suplente de Encuentro Social, Ciudadano Hugo Eric Flores Cervantes: He mantenido en público y en privado que yo sí avalo desde el momento de la formación de nuestro partido político el profesionalismo de la autoridad electoral, nos tocó a nosotros el cambio de Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral, pudimos ver, y hasta vivir con ustedes momentos de transición no sencillos, era reinventar una institución con otras características legales. _____

Voy a seguir creyendo en esta institución, no tengo la menor duda que hoy venimos a plantear un tema que nos afecta, y que si por mi fuera lo plantearía de manera distinta, y hoy lo hemos hecho, desde luego en esta tribuna política y lo haremos en la parte legal, porque creo que esta institución si ha fomentado la pluralidad, y también creo que hay otras instituciones que han sido garantistas con unos y no garantistas con otros. __
Es difícil para nosotros entender que se nos haya desechado, aún que fueron presentados como se ha venido diciendo, por lo difícil que era entender qué había pasado en el proceso, y las sesiones de Cómputo fueron muy rápidas, pero bueno, finalmente teníamos que venir a apelar y no quiero dejar de decir que no todos creemos y seguimos creyendo en esta autoridad electoral y por eso es que venimos a plantear nuestra litis frente a ustedes. _____

No nos han podido comprobar que no llegamos al 3 por ciento y nosotros estamos convencidos de que lo superamos y vamos a acudir ante el Tribunal Electoral, desde luego, para tratar de hacerla valer. _____

Les agradezco, de verdad, toda la paciencia que han tenido con nosotros, porque además estamos absolutamente convencidos de que, inclusive injustamente pudiéramos llegar a perder el registro, pero el partido político ya no, un Gobernador, 43 Diputados, 6 Senadores, más de 1 mil 500 Alcaldes Síndicos, existimos ya como partido

político y estamos acostumbrados, además, a nadar contra corriente, lo vamos a volver a hacer y les agradezco mucho las atenciones que han tenido todos ustedes con nosotros, con el Partido Encuentro Social. _____

A nombre de los militantes, creemos en la democracia y seguramente seguiremos perfeccionándola como país. No nos arrepentimos de haber apoyado a la Coalición “Juntos Haremos Historia” y estamos contentos del cambio político que se dio en nuestro país. _____

Por su atención, muchas gracias. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias a usted señor representante. _____

Permítanme intervenir, simple y sencillamente, si me permiten también mis colegas hacer una intervención final, previa a la votación. _____

No solamente agradeciendo la cortesía, sino devolviendo la cortesía que es una cosa obligada por parte de esta autoridad electoral. A lo largo de estos años, esta mesa se ha venido enriqueciendo de las aportaciones, de las discusiones en ocasiones acaloradas, pero es precisamente para eso que esta mesa se fundó hace 28 años, para que sea aquí en este espacio institucional y de legalidad, en donde las diferencias políticas se resuelvan como lo exige todo Sistema Democrático, es decir, se resuelvan por los cauces legales y, sobre todo, de manera pacífica. _____

La recreación de la democracia supone, no la ausencia de posiciones distintas, no la ausencia de un pluralismo que enriquece la propia democracia, sino también, por el contrario, la discusión tan intensa y ríspida en ocasiones como sea necesaria, pero la existencia de cauces institucionales para que la Resolución de esas diferencias se dé de manera pacífica. _____

Eso es lo que ha nutrido los intercambios de opiniones a lo largo de este Consejo General, y a nombre de las y los Consejeros Electorales, permítanme agradecerle no solamente la participación, en enriquecimiento del trabajo colectivo de parte de tanto del Partido Nueva Alianza, como del Partido Encuentro Social, sino de manera particular la participación que mucho se agradece en esta mesa, enriqueciendo esas discusiones,

del Maestro Roberto Pérez de Alba, del Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias, en esta mesa y, por supuesto, de sus representaciones tanto en el Comité de Radio y Televisión, como ante la Comisión Nacional de Vigilancia, por un lado. _____

Por otro lado, por supuesto, el Licenciado Berlín Rodríguez Soria y, en su momento, de Ernesto Guerra, como representantes de Encuentro Social, y sus homólogos representantes ante las otras instancias del Instituto. _____

Gracias por lo anterior y mucha suerte. _____

Secretario del Consejo, si no hay más intervenciones, le ruego que tome la votación correspondiente. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Dictamen del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto 12, tomando en consideración en esta votación la propuesta de engrose formulada por la Consejera Electoral Adriana Favela, a fin de fortalecer el Proyecto de Dictamen, con las diferentes contribuciones en el mismo sentido de Consejeros Electorales, el anexo que propone el Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña, que se solventaría con una liga que remita a la base de datos al que hacía referencia en su intervención, y la propuesta del Consejero Electoral Marco Antonio Baños, a fin de agregar las pruebas al Proyecto de Dictamen. _____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. _____

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente. _____

Y tal y como establece el Reglamento de Sesiones procederé a realizar el engrose de conformidad con los argumentos expuestos. _____

(Texto del Dictamen aprobado INE/CG1302/2018) Ptos. 12 _____

DICTAMEN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RELATIVO A LA PÉRDIDA DE REGISTRO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO ENCUENTRO SOCIAL, EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR LO MENOS EL TRES POR CIENTO DE LA VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA EN LA ELECCIÓN FEDERAL ORDINARIA CELEBRADA EL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO

ANTECEDENTES

- I. **Registro de Encuentro Social.** El Partido Político Nacional denominado Encuentro Social (en adelante Encuentro Social) obtuvo su registro ante el Instituto Nacional Electoral (en adelante INE) mediante Resolución INE/CG96/2014 aprobada el nueve de julio de dos mil catorce y publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de agosto del mismo año. En tal virtud, el partido político mencionado, al contar con registro vigente ante este Instituto participó en la preparación, desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral Federal ordinario correspondiente al año dos mil dieciocho, y ejerció su derecho a postular candidaturas a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, senadurías y diputaciones federales por ambos principios conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución) y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante LGIPE).
- II. **Consulta formulada por Encuentro Social.** El once de mayo de dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria, fue aprobado el “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se da respuesta a las consultas formuladas por el Partido Encuentro Social”, identificado como INE/CG452/2018 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de agosto del presente año. Este acuerdo, que no fue impugnado, respondió consultas respecto al porcentaje de votación requerido para mantener el registro de un Partido Político Nacional, sobre la asignación de una diputación federal por el principio de representación proporcional cuya fórmula contendiera simultáneamente por el principio de mayoría relativa y obtenga el triunfo; y respecto al efecto producido por haber alcanzado el tres

por ciento de la votación válida emitida durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018.

- III. **Jornada Electoral Federal 2018.** El primero de julio de dos mil dieciocho se celebraron elecciones ordinarias federales para elegir la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, senadurías y diputaciones federales. En ellas participaron los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, MORENA y Encuentro Social. También participaron las coaliciones denominadas: “Por México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano; “Todos por México”, integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza; y “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos del Trabajo, MORENA y Encuentro Social.
- IV. **Segunda consulta formulada por Encuentro Social.** En sesión ordinaria celebrada el dieciocho de julio de dos mil dieciocho, se aprobó el “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se da respuesta a la consulta formulada por el partido denominado Encuentro Social”, identificado con la clave INE/CG651/2018, relativo a la reinterpretación del concepto de votación válida emitida para efectos del artículo 41, Base I, párrafo cuarto de la Constitución, excluyendo de la misma los votos emitidos para candidatos independientes.
- V. **Recurso de apelación promovido por Encuentro Social.** El veintiuno de julio de dos mil dieciocho, Encuentro Social interpuso recurso de apelación, a efecto de controvertir el Acuerdo INE/CG651/2018, mismo que fue resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el tres de agosto del año en curso, confirmando el acto impugnado.
- VI. **Resultados del Proceso Electoral Federal 2017-2018.** El diecinueve de agosto de dos mil dieciocho, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyó la resolución de los medios de impugnación interpuestos por los partidos políticos y las coaliciones respecto a los resultados de las elecciones ordinarias federales para elegir la Presidencia, senadurías y diputaciones, realizadas el primero de julio de dos mil dieciocho.

- VII. Con fechas veintiuno y veintidós de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficios INE/DEOE/1998/2018 e INE/DEOE/2001/2018, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral remitió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos los resultados de las elecciones ordinarias federales para elegir la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, senadurías y diputaciones federales.
- VIII. El veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, en sesión ordinaria, el Consejo General del INE efectuó el cómputo total, la declaración de validez de la elección y la asignación de senadurías y diputaciones federales por el principio de representación proporcional mediante los Acuerdos INE/CG1180/2018 e INE/CG1181/2018.
- IX. El veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió los recursos de reconsideración interpuestos en contra de los Acuerdos mencionados en el numeral que antecede, y confirmó el contenido de los mismos.
- X. **Declaratoria de pérdida de registro.** El tres de septiembre de dos mil dieciocho, la Junta General Ejecutiva de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/JGE135/2018, mediante el cual se emitió la declaratoria de pérdida de registro de Encuentro Social al no haber alcanzado el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho. (Anexo 1)
- XI. El tres de septiembre del presente año, a las diez horas con veinte minutos, se notificó a Encuentro Social la declaratoria referida en el antecedente X, otorgándosele un término de setenta y dos horas para que manifestara lo que a su derecho conviniera.
- XII. El seis de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio ES/CDN/INE-RP/1031/2018, Encuentro Social desahogó la vista mencionada y manifestó lo que a su derecho convino.

Asimismo, mediante oficio ES/CDN/INE-RP/0138/2018, presentado a las 10 horas con 35 minutos del día seis de septiembre de dos mil dieciocho, Encuentro Social solicitó audiencia con la finalidad de atender de manera presencial temas relacionados a la vista mencionada.

En tal virtud, mediante oficio INE/DEPPP/5921/2018, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto comunicó a Encuentro Social que la imposibilidad de atender la solicitud en comento al haberse presentado de manera extemporánea. El plazo otorgado por esta autoridad para manifestar lo que a su derecho conviniera venció a las 10 horas con 20 minutos del seis de septiembre del año en curso.

- XIII. El siete de septiembre de dos mil dieciocho, la Junta General Ejecutiva aprobó el presente proyecto de Dictamen a fin de someterlo a consideración de este máximo órgano de dirección.

En virtud de los antecedentes descritos; y

CONSIDERANDO

Atribuciones del Instituto Nacional Electoral

1. En términos de lo preceptuado en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo primero, de la Constitución en relación con los artículos 29, párrafo 1 y 30, párrafo 2 de la LGIPE, el INE es un organismo público autónomo que tiene como función estatal la organización de las elecciones y es autoridad en la materia, cuyas actividades se rigen por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
2. El artículo 34 de la LGIPE, dispone que el Consejo General, la Presidencia del Consejo General, la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva, constituyen los órganos centrales del INE.

Declaratoria de pérdida de registro

3. El artículo 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo de la Constitución, establece que *“El partido político que no obtenga, al menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro”*.

4. En primer término, se estudiará entonces si Encuentro Social se ubica o no en el supuesto de pérdida de registro a que se refiere el citado artículo 41, Base I, último párrafo de la Constitución, en relación con el artículo 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la Ley General de Partidos Políticos (en adelante LGPP) y posteriormente se analizarán los argumentos vertidos por dicho instituto político, en el desahogo de la vista que en forma oral desahogó el seis de septiembre del presente año.

El contenido del artículo 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo de la Constitución, establece que le será cancelado el registro al Partido Político Nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión; sin embargo, dicho artículo no establece a qué elección se refiere, si se trata de la elección inmediata anterior, si se trata de una elección ordinaria o extraordinaria, si se refiere a la renovación del Congreso en su totalidad o a la elección para renovar cada una de las cámaras, por tanto, la disposición constitucional en comento no puede ser aplicada en forma aislada y, en consecuencia, debe acudirse a su interpretación sistemática y funcional.

Para ello, es necesario tener presente que la LGPP dispuso en el artículo 94, párrafo 1, inciso b) como causal de pérdida de registro de un partido político “no obtener en la **elección ordinaria inmediata anterior**, por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida **en alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos**, tratándose de Partidos Políticos Nacionales”.

De lo anterior, se colige que los elementos necesarios a considerar por la autoridad administrativa para declarar la pérdida de registro, son los siguientes:

- a) Que se trate de una elección ordinaria;
- b) Que sea la elección inmediata anterior;
- c) Que se trate de la elección para diputaciones federales, senadurías o la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos.

En este sentido, la elección inmediata anterior a la resolución sobre la pérdida de registro de Encuentro Social, es la elección ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho para la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, senadurías y diputaciones federales.

Como se señaló en los antecedentes VI, VIII y IX del presente Dictamen, el diecinueve de agosto de dos mil dieciocho, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyó la resolución de los medios de impugnación interpuestos por los partidos políticos respecto a los resultados de las elecciones ordinarias federales para elegir la Presidencia, senadurías y diputaciones, realizadas el primero de julio de dos mil dieciocho. Posteriormente, el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, en sesión ordinaria, el Consejo General del INE efectuó el cómputo total, la declaración de validez de la elección y la asignación de senadurías y diputaciones federales por el principio de representación proporcional mediante los Acuerdos INE/CG1180/2018 e INE/CG1181/2018. Finalmente, el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió los Recursos de Reconsideración interpuestos en contra de los Acuerdos mencionados, y confirmó el contenido de los mismos, lo que concluyó el Proceso Electoral Federal ordinario.

De ahí que se concluya que los datos relacionados con la votación válida emitida son firmes y definitivos.

5. De acuerdo con la Declaratoria de pérdida de registro del Partido Político Nacional denominado Encuentro Social, aprobada por la Junta General Ejecutiva de este Instituto el día tres de septiembre de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo INE/JGE135/2018, el referido partido político se ubica en el supuesto establecido por el artículo 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la LGPP, como consta en los cuadros siguientes:

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS		
PARTIDO POLÍTICO Y CANDIDATO INDEPENDIENTE	VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA	PORCENTAJE
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	9,996,514	18.1837
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	7,677,180	13.9648
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA	1,602,715	2.9153
PARTIDO DEL TRABAJO	3,396,805	6.1788
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	1,051,480	1.9126
MOVIMIENTO CIUDADANO	1,010,891	1.8388
NUEVA ALIANZA	561,193	1.0208
MORENA	25,186,577	45.8145
ENCUENTRO SOCIAL	1,530,101	2.7833
JAIME HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERÓN	2,961,732	5.3874
TOTAL	54,975,188	100%

SENADURÍAS DE MAYORÍA RELATIVA

PARTIDO POLÍTICO Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES	VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA	PORCENTAJE
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	9,852,753	18.3127
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	8,961,369	16.6559
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA	2,973,479	5.5266
PARTIDO DEL TRABAJO	2,149,566	3.9953
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	2,514,578	4.6737
MOVIMIENTO CIUDADANO	2,621,317	4.8721
NUEVA ALIANZA	1,299,733	2.4157
MORENA	21,013,123	39.0558
ENCUENTRO SOCIAL	1,311,337	2.4373
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES	1,105,624	2.0549
TOTAL	53,802,879	100

SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

PARTIDO POLÍTICO Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES	VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA	PORCENTAJE
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	9,969,069	18.3599
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	9,011,312	16.5960
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA	2,982,826	5.4934
PARTIDO DEL TRABAJO	2,164,088	3.9856
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	2,527,710	4.6553
MOVIMIENTO CIUDADANO	2,654,085	4.8880
NUEVA ALIANZA	1,306,792	2.4067
MORENA	21,256,238	39.1473
ENCUENTRO SOCIAL	1,320,283	2.4315
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES	1,105,624	2.0362
TOTAL	54,298,027	100

DIPUTACIONES DE MAYORÍA RELATIVA

PARTIDO POLÍTICO Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES	VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA	PORCENTAJE
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	10,033,157	18.6881
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	9,271,950	17.2703
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA	2,959,800	5.5130
PARTIDO DEL TRABAJO	2,201,192	4.1000
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	2,685,677	5.0024
MOVIMIENTO CIUDADANO	2,473,056	4.6064
NUEVA ALIANZA	1,385,421	2.5805
MORENA	20,790,623	38.7254
ENCUENTRO SOCIAL	1,347,540	2.5100
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 1	534,975	0.9965
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 2	3,989	0.0074
TOTAL	53,687,380	100

DIPUTACIONES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL		
PARTIDO POLÍTICO Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES	VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA	PORCENTAJE
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	10,093,012	18.6874
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	9,307,233	17.2325
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA	2,967,452	5.4943
PARTIDO DEL TRABAJO	2,210,988	4.0937
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	2,694,654	4.9892
MOVIMIENTO CIUDADANO	2,484,185	4.5995
NUEVA ALIANZA	1,390,882	2.5752
MORENA	20,968,859	38.8242
ENCUENTRO SOCIAL	1,353,499	2.5060
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 1	534,975	0.9905
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 2	3,989	0.0074
TOTAL	54,009,728	100

6. Ahora bien, el tres de septiembre del presente año, mediante oficio INE/DS/3167/2018, se notificó a Encuentro Social la declaratoria referida en el considerando anterior de la presente Resolución, dándosele vista para que en un término de setenta y dos horas manifestara lo que a su derecho conviniera.

Por ello, el seis del mismo mes y año, Encuentro Social desahogó la vista que le fue otorgada argumentando básicamente lo siguiente:

- a) “(...) el documento que contiene el acuerdo INE/JGE135/2018 se encuentra indebidamente fundado y motivado, y que además confunde procedimientos e incumple con la norma, lo que no permite, de manera adecuada, ejercer el derecho de audiencia y por tanto ser oído antes de ser vencido.”
- b) “Se aprueba un acuerdo de declaratoria cuando la declaratoria de cancelación cuando solo la puede emitir el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (...)
Lo que en la especie acontece, es que en consecuencia se pretende confundir a mi representada para dejarla en estado de indefensión porque se da derecho de audiencia respecto del proyecto que se presentará en el Consejo General, pero no sobre la declaratoria que se encuentra YA aprobada.
Se advierte que la intención de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral es, sin antes haber escuchado en derecho de

audiencia, dictar un proyecto donde se conceda la pérdida del registro, tal y como quedó redactado el resolutivo segundo.

(...)

1. Se emitió una declaratoria sin haber otorgado derecho de audiencia, por lo que hace al apartado numérico, en términos del resolutivo primero.

2. En el resolutivo segundo se dispone que se otorga derecho de audiencia respecto de la declaratoria acordada y aprobada por la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.

3. Luego, de otorgar derecho de audiencia, volver a emitir un nuevo acto, pero en el que se acuerde proponer la pérdida del registro, haciendo una valoración previa sin antes haber analizado las pruebas presentadas, máxime que ya se decidió fijar la base numérica sin haber escuchado previamente a mi representada, lo que rompe el equilibrio procesal, previsto y tutelado como un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

- c) “En el acuerdo de la Junta General Ejecutiva, en los antecedentes VII, VIII y IX, así como el considerandos (*sic*) 13, solo se hace referencia a los números obtenidos en cada elección por cada partido político.

Sin embargo, no se hace referencia ni se anexa tabla alguna, ni hay manera pública de obtenerla, en la que se pueda conocer la base cierta y exacta de los resultados de todas y cada una de las casillas del Proceso Electoral, lo cual deja en estado absoluto de indefensión a mi representada.

(...)

Con ello se demostrará que el Instituto Nacional Electoral, no cuenta con una base cierta de resultados sobre la cual hizo el cálculo firme, ya que de haberlo hecho se demuestra que mi representada si cumplió con el 3% para sostener el registro.

Aunado a que con ello se comprobará que la base de partición está mal elaborada ya que no se llevó a cabo en todas las casillas.”

- d) “Ahora bien, del acuerdo INE/JGE135/2018, aprobado por la Junta General Ejecutiva el 3 de septiembre de 2018, se advierte la omisión de la autoridad de establecer y desagregar los cálculos y la metodología conforme a los cuales se resuelve que el Partido Encuentro Social obtuvo una votación válida emitida menor al tres por ciento en las elecciones a Presidencia de la República, Senadores y Diputados por ambos principios.

Es decir, la Junta General Ejecutiva no establece en el cuerpo o anexo del Acuerdo INE/JGE135/2018, como resultaron los 1,530,101 votos válidos del Partido Encuentro Social (señalados en el Considerando 13 del Acuerdo), y menos aún, cuántos de estos votos corresponden a la marca del elector únicamente en el recuadro del PES y cuántos resultan de la división entre los partidos integrantes de todas las posibles combinaciones de la coalición.

(...)

Lo anterior a efecto de que no quedará (sic) ninguna duda con relación a la autenticidad de los datos usados y para verificar que las divisiones y asignación de fracciones se hubiera realizado de manera correcta. La omisión de exponer tales cálculos deja en estado de indefensión a mi representada pues no se tiene certeza sobre la realidad numérica de la votación válida emitida utilizada como base, y mucho menos de la repartición de los votos marcados a favor de cualquiera de las tres posibles combinaciones de partidos coaligantes (MORENA-PT-ES/MORENA-PES/PT-PES)."

"Esta recurrencia de casillas con votos cero, uno o dos, bajo la circunstancia de esta elección y conforme al análisis estadístico de la tendencia de voto del Partido Encuentro Social en el resto de las casillas del país, únicamente puede constituir un error en el cómputo de los votos, de cada una de las casillas y de todas en conjunto. Este error se acredita plenamente con el análisis estadístico que se realiza abajo. Al constituir un error sistemático y generalizado no fue reparable durante el proceso de cómputo toda vez que los Consejos y Juntas Distritales, aún (sic) cuando fueron advertidas de dicho error, no actuaron y fueron omisas al respecto. Por último, dicho error sí es determinante para el resultado de la elección toda vez que, al ser de carácter generalizado y sistemático, tiene efecto en la votación de un partido político, el Partido Encuentro Social, que de haberse computado adecuadamente dichas casillas, habría logrado el umbral límite ante la subrepresentación del 3%, mismo que le permite conservar su registro."

"De un estudio de los artículos arriba trasuntos, se desprende que el Instituto Nacional Electoral, no ejecutó con éxito las facultades constitucionales y legales en lo que respecta a la capacitación electoral. Lo anterior se aduce, porque los funcionarios de casilla, tuvieron una capacitación deficiente, que ocasionó un perjuicio al Instituto Político que represento en virtud de que no explicaron claramente a la ciudadanía participante en la organización y desarrollo de las

elecciones, las formas en que se debían de contabilizar los votos para los candidatos que fuesen postulados por una Coalición Electoral.”

- e) “Esta desproporción implica que de aplicarse la inexacta base del INE, se cuente por primera vez en la historia una bancada parlamentaria de partido sin partido, por lo que habría una inexistente vigilancia que los coordinadores y vicecoordinadores acaten los documentos básicos y su normatividad interna, y en caso de no hacerlo así, ser sancionados, lo que hace necesario la existencia de Encuentro Social, como Partido Político Nacional, para realizar dichos principios, y cumplir con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 70 Constitucional.”
- f) “La interpretación del significado de ‘votación válida emitida’ para efectos del artículo 41, Base I, párrafo cuarto de la Constitución Federal, derivado del desarrollo y el alcance que la Sala Superior le ha dado a la figura jurídica de las Candidaturas Independientes en nuestro sistema político-electoral; excluyendo de la votación válida emitida, los votos emitidos en favor de las candidaturas independientes. Lo anterior es así puesto que no es dable continuar con la actual definición aportada por la anterior conformación de la Sala Superior, atendiendo al Interés Público de los Partidos Políticos (I); una debida interpretación extensiva en favor del derecho humano de asociación en materia política de los militantes del partido (II); la naturaleza jurídica diferenciada de las Candidaturas Independientes (III); la razonabilidad que encuentra la reinterpretación propuesta del concepto "votación válida emitida" para efectos del artículo 41, segundo párrafo, fracción I de la Constitución Federal (IV), y; el análisis de los perjuicios que implica la aplicación del actual concepto "votación válida emitida" a los distintos actores políticos del sistema electoral (V).”
- g) “Por lo que toca al principio de transparencia es hasta este momento de Declaratoria de Pérdida de Registro que nos damos por notificados de la votación válida emitida de la elección Presidencial pues en ningún momento del proceso la autoridad electoral notifico a mi representado respecto de los resultados de esta votación. No obstante, realiza una declaratoria de pérdida de registro sin haber transparentado previamente los resultados obtenidos por Encuentro Social en la elección para Presidente de la Republica.”

- h) “Esta H. Junta y Consejo General, deberán tomar en cuenta para resolver sobre el registro el HECHO INÉDITO Y NOVEDOSO que se dio en la presente elección federal 2017-2018, respecto de que por primera ocasión en la historia electoral de México, se da el caso de que un Partido Político Nacional, como lo es Encuentro Social, haya obtenido 56 Diputados Federales y 8 Senadurías que corresponden a más del 10% de la Cámara de Diputados y más del 5% de la Cámara de Senadores, respectivamente, suponiendo sin conceder que no se obtuviera el 3% de la votación válida emitida, por lo que resulta injusto e inequitativo que Encuentro Social pierda su registro, cuando dicho instituto (sic) político, cuenta con representación en el Congreso de la Unión, cuestión ésta que no previó el legislador permanente, por lo que de una interpretación sistemática, justipreciativa, hermenéutica, teleológica, axiomática y funcional de los artículos que contienen las bases fundamentales rectoras de la funcional electoral en el derecho mexicano, conlleva a realizar una interpretación que se aparte del contenido gramatical de la Base I, párrafo Cuarto del artículo 41 Constitucional, y en su lugar, realizar una interpretación más amplia tomando en consideración los fines que persigue nuestra Carta Magna, conforme a l artículo 70 Constitucional, que garantiza la representación de Encuentro Social como un partido minoritario, que a través de la formación de grupos parlamentarios, exprese su ideología política, por lo que es evidente que se necesita la existencia de Encuentro Social, como Partido Político Nacional, para regular y vigilar a los grupos parlamentarios conforme a los Estatutos, a efecto de que se cumpla con la expresión ideológica del partido que los postuló.”
- i) “(...) previo a la declaratoria de pérdida del registro, la Junta General Ejecutivo (sic) debió optar por la interpretación más compatible para el efectivo ejercicio de los derechos políticos, esto es, aquel que resulte menos gravoso para que el instituto que represento pueda desarrollar adecuadamente sus fines constitucionales como partido político.”
- j) “(...) la Junta General y en su caso, el Consejo General del Instituto Nacional electoral, de conformidad con el artículo 1° constitucional se encuentran obligados a analizar la convencionalidad del requisito del tres por ciento de la votación válida emitida para efectos de conservar el registro como Partido Político Nacional.
En el caso, convergen como derechos en juego el de asociación, pluralismo político y el principio democrático, de tal suerte que la

cancelación de registro de un partido no puede desvincularse de la afectación trascendental de estos derechos y su incidencia en una sociedad democrática.”

- A)** Por lo que hace a los argumentos transcritos en los incisos a) y b), no le asiste la razón a Encuentro Social, en virtud de lo siguiente:

De conformidad con lo sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis LVIII/2001¹, “(...) la declaración de pérdida del registro es simplemente una consecuencia lógica y connatural de la causa que lo origina. Consecuentemente, la garantía de audiencia del partido político se cumple desde el momento en que el afectado registra representantes en los consejos general, locales y distritales del propio Instituto, en los que tiene oportunidad de participar en las distintas fases del Proceso Electoral, especialmente en el de los cómputos derivados de la Jornada Electoral; y está en aptitud de combatir dichos cómputos a través de los medios ordinarios de defensa previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o bien, participar como tercero interesado en esos procedimientos jurisdiccionales para hacer patente un derecho incompatible con el que, en su caso, pretenda la parte actora.”

Aunado a lo anterior, la declaratoria emitida por la Junta General Ejecutiva se hizo del conocimiento de Encuentro Social para dar oportunidad a que manifestara lo que a su derecho conviniera, siendo el caso que el partido presentó sus alegatos y ofreció pruebas ante dicha autoridad.

Así también, cabe precisar que conforme a lo dispuesto por los artículos 10 y 15 del Reglamento de Sesiones del Consejo General de este Instituto, los representantes de los partidos políticos cuentan con la facultad de concurrir y participar en las sesiones del Consejo, y que la convocatoria a la sesión respectiva deberá acompañarse de los documentos y anexos necesarios para el análisis de los puntos a tratarse. En consecuencia, Encuentro Social conoció con oportunidad la declaratoria de la Junta General Ejecutiva, así como el presente proyecto de Dictamen que se sometería a consideración de este Consejo, por lo que queda intocada su garantía de audiencia.

¹ PÉRDIDA DE REGISTRO DE PARTIDO POLÍTICO. EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, SE CUMPLE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.

En efecto, se considera que, con las actuaciones realizadas por la Junta General Ejecutiva, se colmaron los supuestos previstos en la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente:

DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO.

Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza.

En el caso se satisfacen los requisitos previstos en la jurisprudencia, por lo siguiente:

Notificación del inicio del procedimiento. Dicho elemento se colma con la vista que la propia Junta General Ejecutiva de este Instituto otorgó al partido político, en el cual se expresan las razones y fundamentos legales de declaratoria relativa al registro de Encuentro Social, tal como se demuestra a continuación.

“PRIMERO. Se declara que Encuentro Social se ubica en el supuesto establecido en el artículo 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la Ley General de Partidos Políticos, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputaciones federales, senadurías o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.”

Oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa y de alegar. También se colman dichos requisitos puesto que, con la declaratoria relativa al registro de Encuentro Social, la Junta General Ejecutiva ordenó dar vista al partido político a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera.

“SEGUNDO. En términos del Considerando 15 del presente Acuerdo, dese vista al partido político Encuentro Social con la presente declaratoria, a fin de garantizar su derecho de audiencia y que esté en condiciones de alegar lo que a su derecho convenga en un término de setenta y dos horas contado a partir de su legal notificación. Una vez transcurrido dicho término, elabórese el Proyecto de Resolución respecto de la pérdida de registro de Encuentro Social, para que, previa aprobación de este órgano colegiado, se someta a consideración del Consejo General del INE.”

En ese sentido, el seis de septiembre del presente año, el partido político desahogó la vista antes citada y formuló alegatos respecto a la declaratoria referida. En dicho escrito, además de las argumentaciones que plasma en ejercicio de su derecho, en la página 131 se advierte que también ofreció como pruebas diversas documentales, pruebas técnicas, instrumental de actuaciones y la presuncional, en su doble aspecto, legal y humana, (Anexo 2) en los términos siguientes:

“1. Documental Privada. Consistente en el oficio número ES/CDN/INE-RP/0690/2018 de fecha 3 de julio del 2018 mediante el cual se solicitó a la autoridad electoral la apertura de los paquetes cuyo resultado en casillas

fueron en 0, 1 y 2 votos que **no** fueron aperturados, no obstante la petición de Encuentro Social, Partido Político Nacional.

2. Documental Pública. consistente en copia certificada de las actas de sesión de los trescientos Distritos electorales del país, en la que consten los resultados firmes y definitivos de todas y cada una de las casillas, en relación a la votación de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa y representación proporcional, así como la votación de Presidente de la República. Desde este momento se solicita a la autoridad lo proporcione, me otorgue derecho de audiencia con tal probanza, y la misma sea valorada.

Dicha prueba será fundamental no solo para conocer la base inicial del cómputo previo a los juicios resueltos en su caso, sino que también para conocer y probar si se llevó a cabo y de manera adecuada, la partición de votos a la que se refiere los artículos 311, 1, c); 313, 1, a), y 314, 1, a) todos ellos de la LEGIPE.

Dichas documentales se necesitan con las capturas anexas donde consten los resultados específicos de la votación de cada una de las casillas.

3. Documental Pública. consistente en copia certificada de las actas de cómputo distrital de los trescientos Distritos electorales del país, en la que consten los resultados firmes y definitivo de todas y cada una de las casillas, en relación a la votación de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa y representación proporcional, así como la votación de Presidente de la República. Desde este momento se solicita a la autoridad lo proporcione, me otorgue derecho de audiencia con tal probanza, y la misma se valorada.

4. Documental Pública. Copia de las actas de escrutinio y cómputo y del cuadernillo de trabajo de todas y cada una de las casillas, en las elecciones federales, en particular la de Presidente de la República. Desde este momento se solicita a la autoridad lo proporcione, me otorgue derecho de audiencia con tal probanza, y la misma sea valorada.

5. Documental pública. Consistente en copia simple o por medio magnético, de todas y cada una de las sentencias recaídas a los juicios de inconformidad y recursos de reconsideración, relativos a las elecciones de diputados, senadores y Presidente de la República. Desde este momento se solicita a la autoridad lo proporcione, me otorgue derecho de audiencia con tal probanza, y la misma sea valorada.

6. Prueba técnica consistente en la base de captura en donde consten todos y cada uno de los resultados definitivos y firmes de cada una de las casillas, tomados tanto de los cómputos distritales o en su caso de las sentencias firmes, con el objeto de tener certeza de los resultados que se están tomando como base para el cálculo. Desde este momento se solicita a la autoridad lo proporcione, me otorgue derecho de audiencia con tal probanza, y la misma sea valorada.

Se solicita lo anterior, ya que no existe medio público por el que se pueda conocer con certeza, los resultados tomados por la Junta General Ejecutiva.

También se solicita con el objeto de identificar que votos fueron identificados como triples o dobles en términos de los artículos 311, 1, c); 313, 1, a) y 314. 1, a), todo ellos de la LEGIPE.

Se solicita que esa base de captura sea entregada en el formato que se encuentra descargable en la página del Instituto Nacional Electoral: <https://computos2018.ine.mx/#/descargaBase>. Cabe señalar que esa base disponible no está actualizada ya que cuenta con resultados sin considerar juicios, por lo que no se tiene certeza de la base final.

7. Pericial en mercadotecnia política.

8. LAS DOCUMENTALES, consistente en las notas de prensa, realizadas por el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, consultables de igual forma en las ligas electrónicas:

➤ SDP NOTICIAS 19-JUNIO-2018
<https://www.sdpsnoticias.com/nacional/2018/06/19/pide-lorenzo-cordova-ejercer-voto-de-manera-sencilla>

➤ “LA VERDAD” 20-JUNIO
<https://laverdadnoticias.com/elecciones-2018/Elecciones-2018-INE-pide-votar-de-manera-sencilla-el-1-de-julio-20180620-0054.html>

➤ NOTICIEROS TELEvisa.NEWS 29-JUNIO-2018
<https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/vota-libre-y-vota-facil-lorenzo-cordova/>

➤ POLÍTICO MX-19-JUNIO-2018
<https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2018/presidencial/ine-llama-votar-de-forma-sencilla-y-con-claridad-el-1-de-julio/>

➤ ARSENAL DIARIO DIGITAL 20-JUNIO-2018
<http://www.elarsenal.net/2018/06/20/llama-ine-a-votar-de-forma-sencilla-y-con-claridad/>

➤ RADIO ZÓCALO NOTICIAS-19-JUNIO-2018
<http://www.radiozocalo.com.mx/pide-ine-a-emitir-voto-sencillo-y-claro/>

9. PRUEBAS TÉCNICAS, consistente en los videos de las entrevistas realizadas al Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, ante diversos medios informativos de televisión, en

los días **dieciséis, veintiocho y veintinueve de junio del año dos mil dieciocho**; para lo cual se adjunta el CD-R; que de igual forma pueden ser consultables en las ligas electrónicas:

➤ **ENTREVISTA CON LORENZO CÓRDOVA, 29-JUNIO-2018**

<https://www.youtube.com/watch?v=QnfJfgtnvkE>

➤ **ENTREVISTA CON LORENZO CÓRDOVA –LORET DE MOLA, 28-JUNIO-2018**

<https://www.youtube.com/watch?v=QRrxZTKA2IM>

➤ **ARISTEGUI NOTICIAS, 16 JUNIO-2018**

<https://aristeguinoticias.com/1606/mexico/lorenzo-cordova-muestra-como-votar-el-1-de-julio-video/>

➤ **ENTREVISTA CON LORENZO CÓRDOVA –DENISE MAERKER, 28-JUNIO-**

<https://www.youtube.com/watch?v=g7o2ecj2k40>

10. PRUEBAS TÉCNICAS, consistente en **UN CD CON TRES ARCHIVOS EN FORMATO PDF; Y CINCO ARCHIVOS EN FORMATO MP4, RELATIVOS A ENTREVISTAS Y NOTAS PERIODÍSTICAS REALIZADAS AL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, DOCTOR LORENZO CÓRDOVA VIANELLO**, siendo las siguientes:

➤ **¿Cómo debes realizar tu voto? INE lanza recomendación el Debate publicado 26 de junio de 2018. (PDF)**

file:///C:/Users/Janice/AppData/Local/Temp/Temp1_EVIDENCIA%20voto%20simple-20180726T044749Z-001.zip/EVIDENCIA%20voto%20simple/¿Cómo%20debes%20realizar%20tu%20voto_%20INE%20lanza%20recomendación%20%20EL%20DEBATE%20publicado%2026%20de%20junio%20de%202018.pdf

➤ **INE pide votar de manera simple y sencilla para evitar nulidad publicado el 20 de junio de 2018. (PDF)**

file:///C:/Users/Janice/AppData/Local/Temp/Temp1_EVIDENCIA%20voto%20simple-20180726T044749Z-001.zip/EVIDENCIA%20voto%20simple/INE%20pide%20votar%20de%20manera%20simple%20y%20sencilla%20para%20evitar%20nulidad%20publicado%20el%2020%20de%20junio%20de%202018.pdf

- **Llaman autoridades a emitir voto simple publicado el 1 de julio de 2018 a los 0023 minutos. (PDF)**

file:///C:/Users/Janice/AppData/Local/Temp/Temp1_EVIDENCIA%20voto%20simple-20180726T044749Z-001.zip/EVIDENCIA%20voto%20simple/Llaman%20autoridades%20a%20emitir%20voto%20simple%20publicado%20el%201%20de%20julio%20de%202018%20a%20las%200023%20minutos.pdf

- **Entrevista a Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, hablando del Proceso Electoral transmitido el 29 de junio de 2018. (MP4)**

- **Entrevista de Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, conversando sobre la Jornada Electoral, en el programa de televisión “En punto” con Denisse Maerker, transmitido el 28 de junio de 2018. (MP4)**

- **Entrevista a Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral en el programa de televisión “Despierta con Loret de Mola” transmitido el 28 de junio de 2018. (MP4)**

- **Promueve el Instituto Nacional Electoral, “Voto Sencillo” en estas elecciones 2018. (MP4)**

- **Si me dicen no vengo los Consejeros Electorales resolverán todas tus dudas de la elección transmitido el 28 de junio de 2018.**

- **Programa de televisión “Si me dicen no vengo”, los Consejeros Electorales resolverán todas tus dudas de la elección, transmitido el 28 de junio de 2018. (MP4)**

Con dicha probanza se considera que se acredita que se vulneró el principio de certeza que debe de existir en toda contienda electoral, respecto de que la expresión de la voluntad del electorado, se realice sin que exista duda en la voluntad e intención de su sufragio, lo que en el caso no sucedió, ya que se vio en su libertad de expresión de su libertad de voto, al ser persuadido por parte del Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, al referir que se debería votar de forma sencilla, es decir, por partido, cuando podía hacerlo por los tres partidos de la coalición “Juntos Haremos Historia” conformada por los Partidos Políticos Nacionales Encuentro Social, Morena y del Trabajo, lo que ocasionó que se le coartara su libertad, respecto de que su voto fuera por los tres partidos coaligados, lo que a su vez trae repercusión en el resultado del porcentaje de la votación que se le atribuye cada partido para conservar su registro.

11. Documental Pública consistente en copia certificada de todas y cada una de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas en las tres elecciones federales. Desde este momento se solicita a la autoridad lo proporcione, me otorgue derecho de audiencia con tal probanza, y la misma sea valorada.

Lo anterior a efecto de comprobar que no se hizo el procedimiento ni el esquema de partición de votos.

12. Los Informes que se presentaron a la Comisión de Fiscalización, del Instituto Nacional Electoral, documentos que obran en poder de esta H. Junta.

Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los puntos de la presente vista.

13. Reglamento del Grupos parlamentario de Encuentro Social, tanto de la bancada de senadores como Diputados, mismos que se anexan.

Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los puntos de la presente vista.

14. LA DOCUMENTAL consistente en 55 informes de la transmisión de tiempos del estado en radio y televisión registrada por Encuentro Social ante el instituto Nacional Electoral, con las que se acredita que Encuentro Social destinó el 100% de su prerrogativa de tiempos de radio y televisión, un 70% para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; 15% para Senadores; y 15% para Diputados, por lo que es evidente que nuestro instituto político destino la mayoría de sus recursos para los actos de campaña de la coalición; sacrificando recursos, publicidad, estrategias y tiempo, para promover y propagar sus candidaturas de origen partidista propio, pues es un hecho notorio que toda la publicidad de radio y televisión y las estrategias políticas, fue canalizada primordialmente para promover la candidatura presidencial; y esto repercutió para el supuesto sin conceder que determinara que mi representada no obtuviera el 3% de la votación válida emitida para refrendar su registro.

Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los puntos de la presente vista.

15. Copia simple del acuse de recibo del oficio número ES/CDN/INE/RP/1011/2018 de fecha 17 de agosto de 2018 dirigido al Prof. Miguel Ángel Solís Rivas Director Ejecutivo de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral.

Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los puntos de la presente vista.

16. En las Copias del capítulo "LOS FINES DEL DERECHO ELECTORAL MEXICANO, REFLEXIONES SOBRE COMO SE OBTIENEN", páginas 1327 a

1351, del Libro *ÉTICA Y DERECHO ELECTORAL EN EL UMBRAL DEL SIGLO XXI*, Memoria del III Congreso Internacional del Derecho Electoral Tomo IV, Compilador J. Jesús Orozco Enríques, Instituto de Investigaciones Jurídicas, serie Doctrina Jurídica número 15, mismas que se anexan.

Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los puntos de la presente vista.

17. los documentos básicos de Encuentro Social, consistentes en Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos.

Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los puntos de la presente vista.

18. Presuncional, en su doble aspecto de legal y humana, en todo lo que favorezca a los interesados de mi representada.

Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los puntos de la presente vista.

19. Instrumental de actuaciones, consistente en todo lo actuado en el expediente integrado con motivo de la emisión de los actos ahora impugnados.

Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los puntos de la presente vista.

Por ello, se estima satisfecho el requisito antes señalado relacionado con la garantía de audiencia, puesto que el partido político ofreció pruebas y alegatos con el desahogo de la vista.

Resolución que dirima las cuestiones debatidas sujeta a impugnación. Dicho requisito también se satisface, pues el Consejo General adopta la resolución que en derecho proceda, a partir del proyecto que la propia Junta General Ejecutiva ha emitido.

Incluso, la determinación que adopte el Consejo General puede ser impugnada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de los medios de impugnación que para tal efecto contempla la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

De ahí se estima que la garantía de audiencia fue salvaguardada por esta autoridad administrativa en favor de Encuentro Social.

Cabe recalcar que el Acuerdo de la Junta General Ejecutiva, aprobado en sesión de fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho, no constituye una declaratoria de pérdida de registro del partido que nos ocupa, sino únicamente un documento en el que se señala el supuesto normativo en el que se ubica el instituto político, mismo documento que fue remitido a este Consejo General para su consideración.

B) Por lo que hace a los argumentos transcritos en los incisos c), d) y g) del presente considerando, no le asiste la razón a Encuentro Social en razón de lo siguiente:

El partido político señala que la Junta General Ejecutiva debió anexar una tabla en la que se realizara el desglose de los resultados de la votación para cada una de las casillas y en la que se estableciera con claridad la repartición de votos a favor de dos o más partidos integrantes de la coalición de la cual formó parte.

Sin embargo, como se ha mencionado, la declaratoria que emitió la Junta General Ejecutiva constituye únicamente una consecuencia lógica de los resultados proporcionados por los cómputos, declaraciones de validez y los fallos dictados por la autoridad jurisdiccional. En el caso de los cómputos distritales, de entidad federativa y el relativo a la elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, todos ellos fueron hechos del conocimiento del partido político en los momentos procedimentales oportunos, dado que cuenta con representación ante los diversos Consejos del Instituto y el último cómputo fue publicado en la página electrónica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como en el Diario Oficial de la Federación desde el once de agosto del presente año, además de que se encuentran disponibles en las direcciones electrónicas siguientes: <https://www.ine.mx/resultados-del-computo-nivel-Distrito-entidad-del-pef-2017-2018/>, <https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/resultados-electorales/>. Asimismo, las sentencias dictadas por las salas de la referida autoridad jurisdiccional, en las cuales se han modificado tales cómputos, fueron publicadas en la página electrónica de la misma para el conocimiento público.

Como es evidente, el partido pretende nuevamente controvertir los resultados que ya han sido objeto de estudio por parte de las instancias administrativas y jurisdiccionales correspondientes, así como manifestarse en torno de los resultados de las elecciones que han sido declaradas válidas y

se encuentran firmes, realizando alegatos similares a los que formuló en su momento ante la autoridad jurisdiccional.

Así, se han agotado todas las etapas del Proceso Electoral correspondiente a las elecciones para la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, senadurías y diputaciones federales, en las cuales el partido ejerció su derecho a impugnar los resultados con los cuales no estaba de acuerdo, por lo que, conforme al principio de definitividad de las etapas electorales, esta autoridad se encuentra impedida para realizar un nuevo estudio respecto de la forma en que se llevaron a cabo los cómputos y en todo caso también se encuentra impedida para modificarlos.

C) En relación con los argumentos transcritos en los incisos e) y h), tampoco le asiste la razón a Encuentro Social, en razón de lo siguiente:

El artículo 95, párrafo 4 de la LGPP señala que la pérdida de registro de un partido político no tiene efectos en relación con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido en las elecciones según el principio de mayoría relativa.

Por su parte, el artículo 70, párrafo tercero de la Constitución establece que “La Ley determinará, las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados”.

Asimismo, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente:

“ARTICULO 26.

1. Conforme a lo dispuesto por el artículo 70 constitucional, el Grupo Parlamentario es el conjunto de diputados según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas en la Cámara.

2. El Grupo Parlamentario se integra por lo menos con cinco diputados y sólo podrá haber uno por cada Partido Político Nacional que cuente con diputados en la Cámara.

ARTICULO 30.

1. Los diputados que no se inscriban o dejen de pertenecer a un Grupo Parlamentario sin integrarse a otro existente, serán considerados como

diputados sin partido, debiéndoseles guardar las mismas consideraciones que a todos los legisladores y apoyándolos, conforme a las posibilidades de la Cámara, para que puedan desempeñar sus atribuciones de representación popular.

ARTICULO 71.

1. Los grupos parlamentarios son las formas de organización que podrán adoptar los senadores con igual afiliación de partido, para realizar tareas específicas en el Senado y coadyuvar al mejor desarrollo del proceso legislativo. Además, deberán contribuir a orientar y estimular la formación de criterios comunes en las deliberaciones en que participen sus integrantes.

ARTICULO 78.

1. Los senadores que no pertenezcan a un grupo parlamentario serán considerados como senadores sin partido, tendrán las consideraciones que a todos los senadores corresponden y apoyos para que puedan desempeñar con eficacia sus funciones, de acuerdo a las posibilidades presupuestales.

Sobre el requerimiento de la existencia del partido político para regular y vigilar a los grupos parlamentarios conforme a los Estatutos, a efecto de que se cumpla con la expresión ideológica del partido que los postuló, cabe señalar que conforme a lo establecido por el artículo 128 de la Constitución “Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”, por lo que la prioridad de una persona que ejerce un cargo de elección popular estriba en el cumplimiento estricto de la Constitución y las leyes, a las cuales debieron estar apegados la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos del partido político que los postuló.

En ese sentido, el ejercicio del cargo para el cual fueron electos los convierte primordialmente en representantes de los intereses populares y en segundo término de los intereses del partido político que los haya postulado.

- D)** Respecto a los argumentos trasuntos en el inciso f) del presente considerando, tampoco le asiste la razón a Encuentro Social, en razón de lo siguiente:

Si bien la tesis LIII/2016 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es aislada y cuya observancia no es obligatoria, ello no implica que la interpretación realizada por dicho órgano jurisdiccional carezca de sustento.

Lo anterior es así, pues las candidaturas independientes pretenden ser una manera de fortalecer los derechos políticos de los mexicanos, poniendo al alcance de la ciudadanía una figura legal adicional para ejercer el derecho al voto activo y pasivo, lo que conlleva a asignarle todos los efectos legales correspondientes a este tipo de manifestaciones.

Por otra parte, conviene recordar que el 11 de mayo del año en curso, este Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG452/2018, en el que se señaló puntualmente lo siguiente:

“(…)

Es importante resaltar, que en el sentido concedido a las disposiciones en estudio se parte de la base de que la votación válida emitida es aquella que resulte de deducir de la suma de todos los votos depositados en las urnas, los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados, acorde con la Tesis LIII/2016 de rubro “VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA. ELEMENTOS QUE LA CONSTITUYEN PARA QUE UN PARTIDO POLÍTICO CONSERVE SU REGISTRO”, en la cual, la Sala Superior consideró que para efectos de la conservación del registro de un Partido Político Nacional la votación válida emitida se integrará con los votos depositados a favor de los diversos partidos políticos y de las candidaturas independientes, que son los que cuentan para elegir presidente, Senadores y Diputados, deduciendo únicamente los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados.

“(…)”

Nota: Énfasis añadido.

Por lo que la interpretación que esta autoridad electoral daría al concepto de votación válida emitida ya había quedado establecido desde esa fecha sin que haya sido controvertido.

Además, como se estableció en el antecedente IV del presente Dictamen, mediante Acuerdo INE/CG651/2018, aprobado por el Consejo General de este Instituto el dieciocho de julio de dos mil dieciocho, relativo a la reinterpretación del concepto de votación válida emitida para efectos del artículo 41, Base I, párrafo cuarto de la Constitución, excluyendo de la misma los votos emitidos para candidatos independientes, se determinó que debía estarse a lo establecido en el acuerdo INE/CG452/2018.

Asimismo, el acuerdo INE/CG651/2018, fue impugnado ante la Sala Superior de la referida autoridad jurisdiccional, en cuya sentencia dictada en el recurso de apelación SUP-RAP-204/2018 confirmó el acuerdo impugnado y razonó lo siguiente:

“Al respecto, esta Sala estima que la norma tildada de inconstitucional es conforme a la Constitución y le da sentido a la intención del Constituyente Permanente cuando introdujo la exigencia a los partidos políticos, de lograr un umbral mínimo de representatividad de la ciudadanía, para efecto de conservar su registro, y a partir de ello tener derecho a participar en la asignación de curules de representación proporcional, y a recibir prerrogativas.

Esta Sala Superior llega a la conclusión de que esa disposición se encuentra conforme a la regularidad marcada por la norma suprema de acuerdo con los siguientes dos ejes: 1) en razón de la operatividad del sistema de participación política que permite que compitan tanto candidatos postulados por partidos políticos como candidatos independientes; 2) en tanto que la Corte, y esta Sala Superior ya se han pronunciado sobre la constitucionalidad del artículo 15, numerales 1 y 2 de la Ley Electoral, en el sentido de que incluir la votación de candidatos independientes en la verificación del umbral mínimo que deben cumplir los partidos para conservar su registro, da coherencia al sistema político electoral y al régimen de partidos.

Por otra parte, como se demostrará el partido promovente parte de una premisa incorrecta al querer confrontar conceptos que por sí mismos, tienen finalidades diferentes, sin que de ello se evidencie colisión alguna con disposiciones constitucionales.

En consecuencia, aun cuando en principio, ese concepto se refiera a la posibilidad de asignación de curules por el principio de representación proporcional, esta Sala Superior considera que dicho concepto también es aplicable a fin de verificar, si un partido político cumple el umbral previsto en la Constitución para conservar su registro.

(...)

Entonces, los votos emitidos a favor de los candidatos independientes son plenamente válidos, tienen su impacto o trascendencia en las elecciones uninominales, y expresan la voluntad del electorado, por una opción política, pues la ciudadanía vota por candidaturas de partido o independientes cuyos nombres aparecen en la boleta.

A partir de ello, la votación emitida por la ciudadanía a favor de una candidatura independiente tiene como fin principal lograr que un candidato acceda al cargo por el que está participando. Sin embargo, en una segunda aproximación, también cuenta para efecto de medir la representatividad que tienen los actores políticos en la contienda, en sentido negativo, pues evidencian una determinada voluntad de que los partidos políticos no cuenten con el apoyo o respaldo de cierto porcentaje de votantes.

(...)

Por tanto, resulta válido sostener que los votos debidamente emitidos, incluyendo los relativos a candidatos independientes deben tener un reflejo respecto a la conservación o no de una determinada fuerza política, pues lo

que representan es el sentir ciudadano, es decir, si las opciones políticas existentes reflejan y garantizan su ideología, principios e intereses.

De ahí que, la forma en qué y cómo se otorgan los votos tiene un impacto en dos vertientes, en un primer momento, respecto del acceso al cargo público por el cual se contiene, y en un segundo escenario, por cuanto a la subsistencia o no de las fuerzas políticas contendientes.

Siendo así, el concepto de votación válida emitida, previsto en el artículo 15, numeral 1 de la Ley Electoral, es congruente con la exigencia constitucional regulada en el diverso 41, Base I, que tiene como finalidad salvaguardar el mínimo de representatividad.

(...)

Conforme a lo expuesto, tanto la Corte como esta Sala Superior a través de los ejercicios de interpretación de la norma tildada de inconstitucional, han dejado claro que los votos de candidatos independientes deben tener un impacto en la permanencia de los partidos políticos, pues no existe justificación razonable para dejarlos sin efectos frente a la verificación de representatividad con la que cuentan aquellos, al ser parte del sistema político, pues estos votos, son el resultado de la identificación que tiene la ciudadanía respecto de las opciones políticas que se le presentaron.

En consecuencia, sigue siendo vigente la Tesis LIII/2016 de esta Sala Superior y de rubro VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA, ELEMENTOS QUE LA CONSTITUYEN PARA QUE UN PARTIDO POLÍTICO CONSERVE SU REGISTRO. Por tanto, de acuerdo con las características del sistema de participación política, así como la ruta interpretativa seguida por la Corte y por esta Sala Superior, resulta válido concluir, que el artículo 15, numeral 1, de la Ley Electoral, es conforme y le da sentido a la intención del Constituyente Permanente cuando introdujo la exigencia a los partidos políticos, de lograr un umbral mínimo de representatividad de la ciudadanía, para efecto de conservar su registro, y a partir de ello tener derecho a participar en la asignación de curules de representación proporcional, y a recibir prerrogativas.”

- E)** Finalmente, en relación con los argumentos transcritos en los incisos i) y j) del presente considerando, tampoco le asiste la razón a Encuentro Social, por lo siguiente:

En relación con la aplicación del control de convencionalidad, es necesario citar lo establecido por el párrafo segundo del artículo 1° de la Constitución, que a la letra señala:

“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.”

Al respecto, tratándose del control de convencionalidad de manera oficiosa, como lo solicita el partido político, debe indicarse que éste se realiza en suplencia de la deficiencia de la normativa interna; es decir, el aplicador de la norma no debe acudir directamente a la normativa internacional para buscar respuesta al asunto, en virtud de que, antes, por lógica y preferencia del derecho interno, deberá analizar cómo está establecido el derecho humano en controversia en los contenidos que existen en las reglas y los principios constitucionales.

Así, debe tenerse presente la intención del Constituyente Permanente al incrementar el porcentaje para la conservación del registro como Partido Político Nacional a partir de la reforma constitucional del año dos mil catorce; en este sentido, en el “Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación, de Reforma del Estado, de Estudios Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, segunda, en relación con las iniciativas con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política-electoral”, en el punto que interesa se estableció:

“A. Aumento del umbral para mantener el registro como Partido Político.

En los procesos de transición, los partidos políticos son principalísimos actores de la vida democrática. Su finalidad primordial es el establecimiento de procedimientos democráticos imparciales, pues más que competir por el poder están construyendo las bases del nuevo Estado. En cierta forma, dejan de ser singularidades en búsqueda de un beneficio político directo e inmediato, para transformarse en formadores del Estado democrático de derecho. Por tal motivo, en la transición, su tarea es única y fundamental, muy diferente a la que se desarrolla dentro de las condiciones ordinarias de la competencia política en una democracia.

(...)

¿Qué es lo que hemos podido apreciar en México con umbrales de representación tan bajos? Primero, un enorme descontento social por los costos de la democracia, pues el umbral tan bajo incentiva la creación de partidos políticos sin suficiente representación popular.

Si bien es cierto que un umbral tan bajo como el vigente en México puede tener la ventaja de ampliar la pluralidad en la arena electoral, también es cierto que resulta incapaz de depurar al sistema político de partidos sin un respaldo popular más amplio produciéndose una fragmentación excesiva del sistema de partidos que induce a una mayor ineficiencia en el conjunto del sistema político.

Del año 2000 a la fecha, dieciséis partidos políticos han participado en elecciones federales, de los cuales, siete han conservado su registro. Como se ve, el umbral de 2% ha sido útil para impedir la obtención o la conservación del registro a

partidos que carecen de suficiente representatividad. Aun así, el actual porcentaje ha permitido la permanencia de formaciones políticas con escasa contribución en términos de su representatividad.

*Finalmente, elevar el porcentaje de votos mínimo necesario previene la existencia de partidos políticos sumamente pequeños que fragmenten en extremo la representación. Una fragmentación extrema diluye la responsabilidad de actitudes no cooperativas en el Congreso. Es decir, un sistema de pocos partidos políticos permite al ciudadano distinguir con claridad las acciones y estrategias de su acción política y parlamentaria. Lo anterior resulta casi imposible en sistemas con una fragmentación extrema, donde los partidos más pequeños pueden asumir comportamientos no cooperativos, sin necesidad de enfrentar los costos de dicha actitud. Así, **un sistema de partidos mayormente representativos, constituye una base importante para el surgimiento de conductas políticas responsables.***”

En ese sentido, el artículo 41 de la Constitución, en relación con la LGPP, establece los requisitos para la obtención y conservación del registro como Partido Político Nacional, teniendo como finalidad que las fuerzas políticas que participen en la vida democrática de nuestro país, como entidades de interés público, cuenten con el número mínimo de afiliados en el primero caso y con el número mínimo de votos y, en el segundo, que no sólo acrediten una efectiva representación popular sino, como ha sido señalado, conductas políticas responsables a través de su participación activa en la vida parlamentaria.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo establecido por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia emitida en el Recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-204/2018, que en lo que interesa señala:

“Entonces, el derecho de asociación en materia política posee las siguientes distinciones: 1) es un derecho reconocido a favor de los ciudadanos; 2) da posibilidad de formar partidos políticos o asociaciones políticas libremente sin intervención, para la consecución de fines comunes; 3) dicha libertad posibilita el pluralismo ideológico y da sustento al Estado constitucional democrático de derecho; y 4) contribuye a la participación democrática de la ciudadanía.

Ahora, como cualquier derecho fundamental, el de asociación y, en consecuencia, el de asociación política, no son absolutos. Esto significa que la ley puede prever restricciones válidas al ejercicio de los derechos, en tanto dichas restricciones se encuentren previstas en la norma jurídica y constituyan un fin legítimo para la ejecución del derecho.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos es clara al señalar, en el artículo 16, que la libertad de asociación sólo puede estar sujeta a restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, y que

se establezcan en interés de la seguridad nacional, del orden público, de la salud o de la moral públicas o de los derechos o libertades de los demás.

Lo anterior significa que las restricciones impuestas a los derechos humanos son necesarias en tanto permiten dar cauce a la interacción con otros derechos de los que son titulares todas las personas, siempre y cuando esos límites sean razonables y justificados.

En el caso, existe una exigencia impuesta por el Constituyente Permanente a los partidos políticos respecto a su permanencia después de cada elección que se celebre, la cual como se ha visto, consiste en obtener el 3% de la 'votación válida emitida'. Dicha exigencia tiene como finalidad medir a partir de un elemento objetivo la representatividad con la que cuenta cada partido político frente a la ciudadanía; en consecuencia, queda a cargo de aquellos efectuar todas las acciones necesarias y conforme al marco de la ley para generar empatía con la ciudadanía a la cual pretenden representar, a efecto de que ésta en cada ejercicio democrático demuestre su respaldo en las urnas por la opción política con la cual se identifique mejor."

Aunado a lo anterior, Encuentro Social señaló que el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio número ES/CDN/INE-RP/1011/2018, solicitó información a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral sin que haya recibido respuesta; además, en el escrito de desahogo de vista, formuló los siguientes cuestionamientos:

- ¿De dónde salieron los 307,306 votos de diferencia entre el PREP y el cómputo distrital en favor de Encuentro Social?
- ¿Cuántas casillas se reabrieron en los cómputos distritales y porque causales?
- ¿De estas casillas que se reabrieron en cuantas y cuales Encuentro Social recuperó votos?
- ¿Cuántos votos recuperó Encuentro Social por casilla?
- ¿De las casillas que se reabrieron Encuentro Social tuvo una votación atípica de 0, 1, 2 y 3 votos en el PREP?
- ¿Cuántas casillas solo fueron cotejadas y no se reabrieron?
- ¿De las casillas cotejadas cuantos votos recuperó Encuentro Social y cuantas y cuales casillas se recuperaron estos votos?
- ¿De las Casillas cotejadas cuantas tenían resultado atípico en el PREP con 0, 1, 2 y 3 votos para Encuentro Social?"

Sobre el particular, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (INE/DEOE/2055/2018) dio respuesta al oficio número ES/CDN/INE-RP/1011/2018, así como a los anteriores cuestionamientos planteados por el Lic. Berlín Rodríguez Soria, representante propietario de Encuentro Social

ante el Consejo General de este Instituto, el seis de septiembre del presente año.

7. El artículo 14 de la Constitución establece que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes aplicables. Dichas formalidades esenciales se refieren al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas o, en este caso, un partido político como entidad de interés público, estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos.

En tal sentido, dentro del procedimiento para resolver sobre la conservación o la pérdida de registro del partido político de referencia, se le otorgó la garantía de audiencia y se combatieron todos y cada uno de los argumentos que hizo valer.

Al respecto, en primer término debe precisarse que, la garantía de audiencia que se dio a Encuentro Social, fue para que alegara lo que a su derecho conviniera respecto de la declaración que hizo la Junta General Ejecutiva a través del acuerdo INE/JGE135/2018, tocante a la pérdida de su registro como Partido Político Nacional, al no haber alcanzado el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el uno de julio de dos mil dieciocho; es decir, el objeto de la garantía de audiencia otorgada no fue para argumentar y ofrecer medios de prueba tendentes a demostrar irregularidades respecto de los resultados de las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados federales, que han quedado firmes y, por ende, son inatacables o controvertibles; sino para que se manifestara respecto de la verificación que esta autoridad hacía del porcentaje que obtuvo en las citadas elecciones respecto de la votación válida emitida que es decisiva.

En ese sentido, se procederá a la valoración de las pruebas ofrecidas el seis de septiembre del año en curso ante esta autoridad por parte del licenciado Berlín Rodríguez Soria, Representante Propietario de Encuentro Social, en ejercicio de la citada garantía de audiencia, mismas que fueron descritas en su escrito de cuenta a partir de la página 131 a la 141; las cuales tiene por objeto desvirtuar que Encuentro Social se ubica en el supuesto de pérdida de registro a que se refiere el artículo 41, Base I, último párrafo, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el diverso 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la Ley General de Partidos Políticos. Lo anterior, conforme a lo siguiente:

- a) Documentales Públicas. Las pruebas ofrecidas que refiere en los numerales 2, 3, 4, 5, 11, 12, 14 y 17 del escrito de desahogo de vista, de conformidad con lo establecido en los artículos 461, párrafo 3, inciso a), en relación con el artículo 462, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, tienen el carácter de documental pública, cuyo valor probatorio es pleno respecto de su autenticidad o la veracidad de los hechos a que se refieran, al ser emitidas por servidores públicos en ejercicio de sus facultades.
- b) Documentales Privadas. Las pruebas ofrecidas en los numerales 1, 8, 13, 16 del escrito de desahogo de vista, de conformidad con lo establecido en los artículos 461, párrafo 3, inciso b), en relación con el artículo 462, párrafos 1 y 3 de la LGIPE, tienen el carácter de documental privada cuyo valor probatorio es indiciario respecto de lo que en ellas se refiere al ser documentales proporcionadas por el partido político que no han sido expedidas por servidor público en ejercicio de sus facultades, por lo que su valor dependerá de todos aquellos elementos que puedan fortalecerlas o que, de manera vinculada, puedan acreditar un hecho puesto que a éstas por sí solas, no se les puede conceder valor probatorio pleno.
- c) Técnicas. Las pruebas ofrecidas en los numerales 6, 7, 9 y 10 del escrito de desahogo de vista, de conformidad con lo establecido en los artículos 461, párrafo 3, inciso b), en relación con el artículo 462, párrafos 1 y 3 de la LGIPE, tienen el carácter de pruebas técnicas cuyo valor probatorio es indiciario, por lo que deberán concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí y generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En ese sentido, la Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FECHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicha autoridad jurisdiccional, señala que es posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa

facilidad, resultan insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen.

En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan, es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y circunstancias que se pretende demostrar. Así, resulta imprescindible que el aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA RQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretende probar, lo que en el caso, no ocurre.

Del estudio y análisis concatenado de los elementos probatorios relatados, los cuales son valorados conforme a las reglas de la lógica, la sana crítica, y la experiencia, en relación con la declaratoria emitida por la Junta General Ejecutiva y las alegaciones vertidas por el partido político, esta autoridad llegó a la conclusión de que resultan insuficientes para alterar o modificar el sentido del presente Dictamen.

Lo anterior es así, en virtud de que, es de explorado derecho que, para garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos, resoluciones y resultados electorales, los actores políticos cuentan con los medios de impugnación previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, específicamente los previsto en el artículo 34, numeral 2, incisos a) y b), denominados juicio de inconformidad y recurso de reconsideración.

En efecto, durante el Proceso Electoral Federal y exclusivamente en la etapa de resultados y de declaraciones de validez, el juicio de inconformidad procede para impugnar las determinaciones de las autoridades electorales federales que violen normas constitucionales o legales relativas a las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados federales.

Así, son actos impugnables a través del juicio de inconformidad los establecidos en el artículo 50 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por su parte, el recurso de reconsideración sólo procederá para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales del TEPJF en los casos siguientes:

- a) En juicios de inconformidad que se hayan promovido en contra de los resultados de las elecciones de diputados y senadores, así como las asignaciones por el principio de representación proporcional que respecto de dichas elecciones realice el Consejo General del Instituto, siempre y cuando se cumplan los presupuestos y requisitos establecidos en este ordenamiento, y
- b) En los demás medios de impugnación de la competencia de las Salas Regionales, cuando hayan determinado la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución.

Así, para el recurso de reconsideración son presupuestos los siguientes:

- a) Que la sentencia de la Sala Regional del Tribunal:
 - I. Haya dejado de tomar en cuenta causales de nulidad que hubiesen sido invocadas y debidamente probadas en tiempo y forma, por las cuales se hubiere podido modificar el resultado de la elección; o
 - II. Haya otorgado indebidamente la constancia de mayoría y validez o asignado la primera minoría a una fórmula de candidatos distinta a la que originalmente se le otorgó o asignó; o
 - III. Haya anulado indebidamente una elección, o
 - IV. Haya resuelto la no aplicación de alguna ley en materia electoral por estimarla contraria a la Constitución.
- b) Que este Consejo General haya asignado indebidamente diputados o senadores por el principio de representación proporcional:
 - I. Por existir error aritmético en los cálculos realizados por el propio Consejo; o
 - II. Por no tomar en cuenta las sentencias que, en su caso, hubiesen dictado las Salas del Tribunal; o

III. Por contravenir las reglas y fórmulas de asignación.

Con base en las reglas que han sido citadas de los medios de impugnación de mérito, se puede concluir que son en éstos y ante las autoridades jurisdiccionales competentes, en los momentos procesales oportunos, donde se debe probar o acreditar las posibles violaciones a las normas constitucionales o legales relativas a las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadurías y diputaciones federales; por ende, una vez que estén firmes los resultados de las elecciones, es que esta autoridad puede determinar si se acredita o no una causa de pérdida de registro de un Partido Político Nacional, como en el caso concreto, lo que es congruente con lo que el legislador federal dispuso en el artículo 95, numeral 1, de la LGPP, que señala que, para la pérdida del registro a que se refieren los incisos a) al c) del párrafo 1 del artículo 94 de esa ley, la Junta General Ejecutiva del Instituto emitirá la declaratoria correspondiente, misma que deberá fundarse en los resultados de los cómputos y declaraciones de validez respectivas de los consejos del Instituto, así como en las resoluciones del Tribunal Electoral, las cuales han quedado firmes y son inatacables.

Lo anterior, de conformidad con el Dictamen que emitió la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación el ocho de agosto de dos mil dieciocho, relativo al cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a la declaración de validez y a la de Presidente Electo, en el que, entre otros, señaló que los resultados de los trescientos cómputos distritales de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos quedaron firmes, conforme lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que establece que las elecciones cuyos cómputos, constancias de validez y mayoría o de asignación no sean impugnadas en tiempo y forma, se considerarán válidas, **definitivas e inatacables**. Asimismo, la Sala Superior sostuvo que, como las impugnaciones relacionadas con la elección presidencial habían sido desestimadas o declaradas improcedentes por ese órgano jurisdiccional, lo conducente era sumar los datos consignados en las actas de cómputo distrital respectivas, con la finalidad de obtener la votación total de la elección, de la que se desprende que Encuentro Social tuvo una votación válida emitida de 1,530,101 votos, que corresponde al 2.7833%.

Por lo que hace a la elección de senadurías y diputaciones, este Consejo General, el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria, efectuó el cómputo total, la declaración de validez de la

elección y la asignación de éstas por el principio de representación proporcional, mediante los Acuerdos INE/CG1180/2018 e INE/CG1181/2018, en los que se dio cuenta de todos los juicios de inconformidad y recursos de reconsideración interpuestos en la elección de senadurías y diputaciones, respectivamente. En el de senadurías, los Partidos Políticos Nacionales interpusieron Juicios de Inconformidad, con los cuales combatieron los cómputos de entidad federativa de la elección de senadurías por ambos principios, medios de impugnación tramitados por los respectivos Consejos del INE, sustanciados y resueltos por las Salas Regionales:

Sala Superior: SUP-JIN-6/2018, SUP-JIN-7/2018 y SUP-JIN-263/2018.

Sala Regional Guadalajara: SG-JIN-20/2018, SG-JIN-22/2018, SG-JIN-24/2018, SG-JIN-25/2018, SG-JIN-26/2018, SG-JIN-27/2018, SG-JIN-29/2018, SG-JIN-34/2018, SG-JIN-35/2018, SG-JIN-38/2018, SG-JIN-40/2018, SG-JIN-44/2018, SG-JIN-45/2018, SG-JIN-46/2018, SG-JIN-50/2018, SG-JIN-52/2018, SG-JIN-58/2018, SG-JIN-60/2018, SG-JIN-64/2018, SG-JIN-65/2018, SG-JIN-66/2018, SG-JIN-68/2018, SG-JIN-70/2018, SG-JIN-71/2018, SG-JIN-74/2018, SG-JIN-76/2018, SG-JIN-77/2018, SG-JIN-78/2018, SG-JIN-80/2018, SG-JIN-83/2018, SG-JIN-84/2018, SG-JIN-90/2018, SG-JIN-91/2018, SG-JIN-93/2018, SG-JIN-95/2018, SG-JIN-96/2018, SG-JIN-99/2018, SG-JIN-101/2018, SG-JIN-102/2018, SG-JIN-104/2018, SG-JIN-105/2018, SG-JIN-106/2018, SG-JIN-107/2018, SG-JIN-109/2018, SG-JIN-110/2018, SG-JIN-111/2018, SG-JIN-113/2018, SG-JIN-116/2018, SG-JIN-118/2018, SG-JIN-119/2018, SG-JIN-121/2018, SG-JIN-122/2018, SG-JIN-126/2018, SG-JIN-127/2018, SG-JIN-130/2018, SG-JIN-131/2018, SG-JIN-133/2018, SG-JIN-134/2018, SG-JIN-136/2018, SG-JIN-138/2018, SG-JIN-140/2018, SG-JIN-141/2018, SG-JIN-145/2018, SG-JIN-146/2018, SG-JIN-148/2018, SG-JIN-150/2018, SG-JIN-151/2018, SG-JIN-154/2018, SG-JIN-155/2018, SG-JIN-157/2018, SG-JIN-159/2018, SG-JIN-162/2018, SG-JIN-164/2018, SG-JIN-165/2018, SG-JIN-167/2018, SG-JIN-170/2018, SG-JIN-171/2018, SG-JIN-174/2018, SG-JIN-175/2018, SG-JIN-177/2018, SG-JIN-179/2018, SG-JIN-182/2018, SG-JIN-184/2018, SG-JIN-186/2018, SG-JIN-187/2018, SG-JIN-190/2018, SG-JIN-192/2018, SG-JIN-193/2018, SG-JIN-196/2018, SG-JIN-197/2018, SG-JIN-200/2018, SG-JIN-201/2018, SG-JIN-203/2018, SG-JIN-205/2018, SG-JIN-207/2018, SG-JIN-209/2018, SG-JIN-211/2018, SG-JIN-213/2018, SG-JIN-215/2018, SG-JIN-218/2018 y SG-JIN-219/2018.

Sala Regional Monterrey: SM-JIN-1/2018, SM-JIN-14-2018, SM-JIN-16-2018, SM-JIN-20-2018, SM-JIN-21-2018, SM-JIN-28-2018, SM-JIN-30-2018, SM-JIN-34-2018, SM-JIN-38-2018, SM-JIN-40-2018, SM-JIN-51-2018, SM-JIN-54-2018, SM-JIN-58-2018, SM-JIN-62-2018, SM-JIN-67-2018, SM-JIN-69-2018, SM-JIN-70-2018, SM-JIN-73-2018, SM-JIN-75-2018, SM-JIN-76-2018, SM-JIN-79-2018, SM-JIN-82-2018, SM-JIN-84-2018, SM-JIN-89-2018, SM-JIN-92-2018, SM-JIN-94-2018, SM-JIN-97-2018, SM-JIN-100-2018, SM-JIN-101-2018, SM-JIN-102-2018, SM-JIN-103-2018, SM-JIN-0104-2018, SM-JIN-106-2018, SM-JIN-109-2018, SM-JIN-111-2018, SM-JIN-113-2018, SM-JIN-115-2018, SM-JIN-116-2018, SM-JIN-118-2018, SM-JIN-120-2018, SM-JIN-123-2018, SM-JIN-124-2018, SM-JIN-126-2018, SM-JIN-128-2018, SM-JIN-130-2018, SM-JIN-133-2018, SM-JIN-135-2018, SM-JIN-137-2018, SM-JIN-139-2018, SM-JIN-140-2018, SM-JIN-143-2018, SM-JIN-145-2018, SM-JIN-147-2018, SM-JIN-149-2018, SM-JIN-150-2018, SM-JIN-152-2018, SM-JIN-155-2018, SM-JIN-157-2018, SM-JIN-159-2018, SM-JIN-161-2018, SM-JIN-162-2018, SM-JIN-164-2018, SM-JIN-166-2018, SM-JIN-169-2018, SM-JIN-171-2018, SM-JIN-173-2018, SM-JIN-175-2018, SM-JIN-177-2018, SM-JIN-179-2018, SM-JIN-182-2018, SM-JIN-183-2018, SM-JIN-185-2018, SM-JIN-187-2018, SM-JIN-190-2018, SM-JIN-191-2018, SM-JIN-193-2018, SM-JIN-194-2018, SM-JIN-197-2018, SM-JIN-198-2018, SM-JIN-200-2018, SM-JIN-201-2018, SM-JIN-202-2018, SM-JIN-204-2018, SM-JIN-206-2018, SM-JIN-208-2018, SM-JIN-0211-2018, SM-JIN-212-2018, SM-JIN-214/2018 y SM-JIN-216/2018.

Así como el Juicio Ciudadano SM-JDC-0637-2018.

Sala Regional Xalapa: SX-JIN-8/2018, SX-JIN-14/2018, SX-JIN-16/2018, SX-JIN-17/2018, SX-JIN-21/2018, SX-JIN-28/2018, SX-JIN-29/2018, SX-JIN-34/2018, SX-JIN-36/2018, SX-JIN-42/2018, SX-JIN-46/2018, SX-JIN-50/2018, SX-JIN-55/2018, SX-JIN-59/2018, SX-JIN-67/2018, SX-JIN-68/2018, SX-JIN-73/2018, SX-JIN-75/2018, SX-JIN-77/2018, SX-JIN-79/2018, SX-JIN-81/2018, SX-JIN-83/2018, SX-JIN-87/2018, SX-JIN-88/2018, SX-JIN-89/2018, SX-JIN-93/2018, SX-JIN-95/2018, SX-JIN-96/2018, SX-JIN-99/2018, SX-JIN-101/2018, SX-JIN-103/2018, SX-JIN-105/2018, SX-JIN-107/2018, SX-JIN-109/2018, SX-JIN-110/2018, SX-JIN-113/2018, SX-JIN-115/2018, SX-JIN-117/2018, SX-JIN-118/2018, SX-JIN-121/2018, SX-JIN-122/2018, SX-JIN-125/2018, SX-JIN-126/2018, SX-JIN-128/2018, SX-JIN-131/2018, SX-JIN-132/2018, SX-JIN-135/2018, SX-JIN-136/2018, SX-JIN-139/2018, SX-JIN-140/2018, SX-JIN-141/2018, SX-JIN-144/2018, SX-JIN-147/2018, SX-JIN-148/2018, SX-JIN-150/2018, SX-JIN-152/2018, SX-JIN-153/2018, SX-JIN-155/2018, SX-JIN-159/2018, SX-JIN-

161/2018, SX-JIN-162/2018, SX-JIN-163/2018, SX-JIN-165/2018, SX-JIN-169/2018, SX-JIN-170/2018, SX-JIN-172/2018, SX-JIN-175/2018, SX-JIN-177/2018, SX-JIN-178/2018, SX-JIN-181/2018, SX-JIN-183/2018, SX-JIN-185/2018, SX-JIN-187/2018, SX-JIN-188/2018, SX-JIN-190/2018, SX-JIN-193/2018, SX-JIN-195/2018, SX-JIN-197/2018, SX-JIN-199/2018, SX-JIN-201/2018, SX-JIN-203/2018, SX-JIN-204/2018 y SX-JIN-205/2018.

Sala Regional Ciudad de México: SCM-JIN-10/2018, SCM-JIN-14/2018, SCM-JIN-21/2018, SCM-JIN-26/2018, SCM-JIN-29/2018, SCM-JIN-31/2018, SCM-JIN-40/2018, SCM-JIN-44/2018, SCM-JIN-45/2018, SCM-JIN-46/2018, SCM-JIN-49/2018, SCM-JIN-51/2018, SCM-JIN-53/2018, SCM-JIN-55/2018, SCM-JIN-60/2018, SCM-JIN-61/2018, SCM-JIN-62/2018, SCM-JIN-63/2018, SCM-JIN-66/2018, SCM-JIN-69/2018, SCM-JIN-73/2018, SCM-JIN-75/2018, SCM-JIN-77/2018, SCM-JIN-78/2018, SCM-JIN-80/2018, SCM-JIN-81/2018, SCM-JIN-84/2018, SCM-JIN-86/2018, SCM-JIN-87/2018, SCM-JIN-88/2018, SCM-JIN-92/2018, SCM-JIN-93/2018, SCM-JIN-95/2018, SCM-JIN-96/2018, SCM-JIN-97/2018, SCM-JIN-98/2018, SCM-JIN-100/2018, SCM-JIN-101/2018, SCM-JIN-103/2018, SCM-JIN-104/2018, SCM-JIN-106/2018, SCM-JIN-108/2018, SCM-JIN-109/2018, SCM-JIN-112/2018, SCM-JIN-114/2018, SCM-JIN-116/2018, SCM-JIN-117/2018, SCM-JIN-118/2018, SCM-JIN-120/2018, SCM-JIN-123/2018, SCM-JIN-125/2018, SCM-JIN-126/2018, SCM-JIN-128/2018, SCM-JIN-130/2018, SCM-JIN-133/2018, SCM-JIN-136/2018, SCM-JIN-138/2018, SCM-JIN-139/2018, SCM-JIN-141/2018, SCM-JIN-143/2018, SCM-JIN-145/2018, SCM-JIN-146/2018, SCM-JIN-149/2018, SCM-JIN-151/2018, SCM-JIN-153/2018, SCM-JIN-154/2018, SCM-JIN-157/2018, SCM-JIN-159/2018, SCM-JIN-160/2018, SCM-JIN-163/2018, SCM-JIN-165/2018, SCM-JIN-166/2018, SCM-JIN-167/2018, SCM-JIN-169/2018, SCM-JIN-171/2018, SCM-JIN-173/2018, SCM-JIN-175/2018, SCM-JIN-177/2018, SCM-JIN-178/2018, SCM-JIN-180/2018, SCM-JIN-185/2018, SCM-JIN-186/2018, SCM-JIN-188/2018, SCM-JIN-191/2018, SCM-JIN-193/2018, SCM-JIN-194/2018, SCM-JIN-196/2018, SCM-JIN-197/2018, SCM-JIN-200/2018, SCM-JIN-202/2018, SCM-JIN-205/2018, SCM-JIN-207/2018 y SCM-JIN-209/2018.

Sala Regional Toluca: ST-JIN-50/2018, ST-JIN-56/2018, ST-JIN-57/2018, ST-JIN-58/2018, ST-JIN-59/2018, ST-JIN-61/2018, ST-JIN-66/2018, ST-JIN-69/2018, ST-JIN-70/2018, ST-JIN-73/2018, ST-JIN-76/2018, ST-JIN-79/2018, ST-JIN-81/2018, ST-JIN-84/2018, ST-JIN-85/2018, ST-JIN-86/2018, ST-JIN-88/2018, ST-JIN-89/2018, ST-JIN-91/2018, ST-JIN-93/2018, ST-JIN-97/2018, ST-JIN-101/2018, ST-JIN-104/2018, ST-JIN-107/2018, ST-JIN-109/2018, ST-

JIN-110/2018, ST-JIN-112/2018, ST-JIN-115/2018, ST-JIN-117/2018, ST-JIN-118/2018, ST-JIN-120/2018, ST-JIN-123/2018, ST-JIN-124/2018, ST-JIN-127/2018, ST-JIN-128/2018, ST-JIN-131/2018, ST-JIN-133/2018, ST-JIN-135/2018, ST-JIN-136/2018, ST-JIN-139/2018, ST-JIN-140/2018, ST-JIN-142/2018, ST-JIN-145/2018, ST-JIN-147/2018, ST-JIN-150/2018, ST-JIN-152/2018, ST-JIN-154/2018, ST-JIN-156/2018, ST-JIN-158/2018, ST-JIN-160/2018, ST-JIN-162/2018, ST-JIN-163/2018, ST-JIN-165/2018, ST-JIN-167/2018, ST-JIN-170/2018, ST-JIN-171/2018, ST-JIN-174/2018, ST-JIN-176/2018, ST-JIN-178/2018, ST-JIN-180/2018, ST-JIN-182/2018, ST-JIN-184/2018, ST-JIN-185/2018, ST-JIN-186/2018, ST-JIN-189/2018, ST-JIN-191/2018, ST-JIN-193/2018, ST-JIN-194/2018, ST-JIN-197/2018, ST-JIN-199/2018, ST-JIN-201/2018, ST-JIN-202/2018 y ST-JIN-204/2018.

Asimismo, se interpusieron Recursos de Reconsideración en contra de las sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales, relacionadas con la elección de Senadores por ambos principios, mismos que se indican:

Recursos de Reconsideración:

SUP-REC-594/2018, SUP-REC-595/2018, SUP-REC-596/2018, SUP-REC-597/2018, SUP-REC-598/2018, SUP-REC-599/2018, SUP-REC-600/2018, SUP-REC-601/2018, SUP-REC-602/2018, SUP-REC-603/2018, SUP-REC-604/2018, SUP-REC-605/2018, SUP-REC-606/2018, SUP-REC-607/2018, SUP-REC-608/2018, SUP-REC-610/2018, SUP-REC-611/2018, SUP-REC-612/2018, SUP-REC-614/2018, SUP-REC-615/2018, SUP-REC-616/2018, SUP-REC-628/2018, SUP-REC-648/2018, SUP-REC-649/2018, SUP-REC-650/2018, SUP-REC-651/2018, SUP-REC-652/2018, SUP-REC-653/2018, SUP-REC-654/2018, SUP-REC-655/2018, SUP-REC-656/2018, SUP-REC-657/2018, SUP-REC-658/2018, SUP-REC-659/2018, SUP-REC-660/2018, SUP-REC-661/2018, SUP-REC-662/2018, SUP-REC-663/2018, SUP-REC-664/2018, SUP-REC-665/2018, SUP-REC-666/2018, SUP-REC-667/2018, SUP-REC-668/2018, SUP-REC-669/2018, SUP-REC-670/2018, SUP-REC-671/2018, SUP-REC-672/2018, SUP-REC-673/2018, SUP-REC-674/2018, SUP-REC-675/2018, SUP-REC-676/2018, SUP-REC-677/2018, SUP-REC-678/2018, SUP-REC-679/2018, SUP-REC-680/2018, SUP-REC-681/2018, SUP-REC-685/2018, SUP-REC-686/2018, SUP-REC-687/2018, SUP-REC-688/2018, SUP-REC-689/2018, SUP-REC-690/2018, SUP-REC-691/2018, SUP-REC-692/2018, SUP-REC-693/2018, SUP-REC-695/2018, SUP-REC-696/2018, SUP-REC-697/2018, SUP-REC-698/2018, SUP-REC-699/2018, SUP-REC-706/2018, SUP-REC-707/2018, SUP-REC-708/2018, SUP-REC-

722/2018, SUP-REC-724/2018, SUP-REC-735/2018, SUP-REC-747/2018, SUP-REC-784/2018, SUP-REC-819/2018, SUP-REC-822/2018, SUP-REC-823/2018, SUP-REC-824/2018, SUP-REC-825/2018, SUP-REC-830/2018, SUP-REC-849/2018, SUP-REC-851/2018, SUP-REC-852/2018, SUP-REC-853/2018, SUP-REC-885/2018, SUP-REC-887/2018, SUP-REC-888/2018, SUP-REC-890/2018, SUP-REC-893/2018 y SUP-REC-910/2018.

Al respecto, las Salas Monterrey, Ciudad de México y Toluca, así como la Sala Superior, en las sentencias emitidas en los expedientes del juicio ciudadano SM-JDC-637/2018; en los juicios de inconformidad SM-JIN-1/2018, SM-JIN-102/2018, SM-JIN-103/2018, SCM-JIN-103/2018 y ST-JIN-86/2018, así como en los recursos de reconsideración SUP-REC-853/2018 y SUP-REC-893/2018, respectivamente, declararon la nulidad o modificación de la votación recibida en diversas casillas, por actualizarse alguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 75, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En consecuencia, las Salas Superior y Regionales modificaron los resultados de la elección de Senadores, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, y determinaron la recomposición de los cómputos de entidad respectivos. En este sentido, acorde con el principio de certeza, para la asignación de senadurías por el principio de representación proporcional, la votación que obtuvo cada partido político tomó en cuenta lo resuelto en las sentencias precisadas.

En el caso de la elección de diputaciones, también los Partidos Políticos Nacionales interpusieron diversos Juicios de Inconformidad, con los cuales combatieron los cómputos distritales de la elección de diputados por ambos principios, medios de impugnación tramitados por los respectivos Consejos del Instituto Nacional Electoral, sustanciados y resueltos por la Sala Superior; así como por las Salas Regionales, los cuales se enlistan a continuación:

Sala Superior: SUP-JIN-3/2018, SUP-JIN-4/2018, SUP-JIN-206/2018, SUP-JIN-207/2018 y SUP-JIN-294/2018.

Sala Guadalajara: SG-JIN-1/2018, SG-JIN-2/2018, SG-JIN-3/2018, SG-JIN-4/2018, SG-JIN-5/2018, SG-JIN-6/2018, SG-JIN-7/2018, SG-JIN-8/2018, SG-JIN-9/2018, SG-JIN-10/2018, SG-JIN-11/2018, SG-JIN-12/2018, SG-JIN-13/2018, SG-JIN-14/2018, SG-JIN-15/2018, SG-JIN-16/2018, SG-JIN-17/2018, SG-JIN-18/2018, SG-JIN-19/2018, SG-JIN-21/2018, SG-JIN-

23/2018, SG-JIN-28/2018, SG-JIN-30/2018, SG-JIN-31/2018, SG-JIN-32/2018, SG-JIN-33/2018, SG-JIN-36/2018, SG-JIN-37/2018, SG-JIN-39/2018, SG-JIN-41/2018, SG-JIN-42/2018, SG-JIN-43/2018, SG-JIN-47/2018, SG-JIN-48/2018, SG-JIN-49/2018, SG-JIN-51/2018, SG-JIN-53/2018, SG-JIN-54/2018, SG-JIN-55/2018, SG-JIN-56/2018, SG-JIN-57/2018, SG-JIN-59/2018, SG-JIN-61/2018, SG-JIN-62/2018, SG-JIN-63/2018, SG-JIN-67/2018, SG-JIN-69/2018, SG-JIN-72/2018, SG-JIN-73/2018, SG-JIN-75/2018, SG-JIN-79/2018, SG-JIN-81/2018, SG-JIN-82/2018, SG-JIN-85/2018, SG-JIN-86/2018, SG-JIN-87/2018, SG-JIN-88/2018, SG-JIN-89/2018, SG-JIN-92/2018, SG-JIN-94/2018, SG-JIN-97/2018, SG-JIN-98/2018, SG-JIN-100/2018, SG-JIN-103/2018, SG-JIN-108/2018, SG-JIN-112/2018, SG-JIN-114/2018, SG-JIN-115/2018, SG-JIN-117/2018, SG-JIN-120/2018, SG-JIN-123/2018, SG-JIN-124/2018, SG-JIN-125/2018, SG-JIN-128/2018, SG-JIN-129/2018, SG-JIN-132/2018, SG-JIN-135/2018, SG-JIN-137/2018, SG-JIN-139/2018, SG-JIN-142/2018, SG-JIN-143/2018, SG-JIN-144/2018, SG-JIN-147/2018, SG-JIN-149/2018, SG-JIN-152/2018, SG-JIN-153/2018, SG-JIN-156/2018, SG-JIN-158/2018, SG-JIN-160/2018, SG-JIN-161/2018, SG-JIN-163/2018, SG-JIN-166/2018, SG-JIN-168/2018, SG-JIN-169/2018, SG-JIN-172/2018, SG-JIN-173/2018, SG-JIN-176/2018, SG-JIN-178/2018, SG-JIN-180/2018, SG-JIN-181/2018, SG-JIN-183/2018, SG-JIN-185/2018, SG-JIN-188/2018, SG-JIN-189/2018, SG-JIN-191/2018, SG-JIN-194/2018, SG-JIN-195/2018, SG-JIN-198/2018, SG-JIN-199/2018, SG-JIN-202/2018, SG-JIN-204/2018, SG-JIN-206/2018, SG-JIN-208/2018, SG-JIN-210/2018, SG-JIN-212/2018, SG-JIN-214/2018, SG-JIN-216/2018 y SG-JIN-217/2018.

Sala Monterrey: SM-JIN-0002-2018, SM-JIN-0003-2018, SM-JIN-0004-2018, SM-JIN-0005-2018, SM-JIN-0006-2018, SM-JIN-0007-2018, SM-JIN-0008-2018, SM-JIN-0009-2018, SM-JIN-0010-2018, SM-JIN-0011-2018, SM-JIN-0012-2018, SM-JIN-0013-2018, SM-JIN-0015-2018, SM-JIN-0017-2018, SM-JIN-0018-2018, SM-JIN-0019-2018, SM-JIN-0022-2018, SM-JIN-0023-2018, SM-JIN-0024-2018, SM-JIN-0025-2018, SM-JIN-0026-2018, SM-JIN-0027-2018, SM-JIN-0029-2018, SM-JIN-0031-2018, SM-JIN-0032-2018, SM-JIN-0033-2018, SM-JIN-0035-2018, SM-JIN-0036-2018, SM-JIN-0037-2018, SM-JIN-0039-2018, SM-JIN-0041-2018, SM-JIN-0042-2018, SM-JIN-0043-2018, SM-JIN-0044-2018, SM-JIN-0045-2018, SM-JIN-0046-2018, SM-JIN-0047-2018, SM-JIN-0048-2018, SM-JIN-0049-2018, SM-JIN-0050-2018, SM-JIN-0052-2018, SM-JIN-0053-2018, SM-JIN-0055-2018, SM-JIN-0056-2018, SM-JIN-0057-2018, SM-JIN-0059-2018, SM-JIN-0060-2018, SM-JIN-0061-2018, SM-JIN-0063-2018, SM-JIN-0064-2018, SM-JIN-0065-2018, SM-JIN-

0066-2018, SM-JIN-0068-2018, SM-JIN-0071-2018, SM-JIN-0072-2018, SM-JIN-0074-2018, SM-JIN-0077-2018, SM-JIN-0078-2018, SM-JIN-0080-2018, SM-JIN-0081-2018, SM-JIN-0083-2018, SM-JIN-0085-2018, SM-JIN-0086-2018, SM-JIN-0087-2018, SM-JIN-0088-2018, SM-JIN-0090-2018, SM-JIN-0091-2018, SM-JIN-0093-2018, SM-JIN-0095-2018, SM-JIN-0096-2018, SM-JIN-0098-2018, SM-JIN-0099-2018, SM-JIN-0105-2018, SM-JIN-0107-2018, SM-JIN-0108-2018, SM-JIN-0110-2018, SM-JIN-0112-2018, SM-JIN-0114-2018, SM-JIN-0117-2018, SM-JIN-0119-2018, SM-JIN-0121-2018, SM-JIN-0122-2018, SM-JIN-0125-2018, SM-JIN-0127-2018, SM-JIN-0129-2018, SM-JIN-0131-2018, SM-JIN-0132-2018, SM-JIN-0134-2018, SM-JIN-0136-2018, SM-JIN-0138-2018, SM-JIN-0141-2018, SM-JIN-0142-2018, SM-JIN-0144-2018, SM-JIN-0146-2018, SM-JIN-0148-2018, SM-JIN-0151-2018, SM-JIN-0153-2018, SM-JIN-0154-2018, SM-JIN-0156-2018, SM-JIN-0158-2018, SM-JIN-0160-2018, SM-JIN-0163-2018, SM-JIN-0165-2018, SM-JIN-0167-2018, SM-JIN-0168-2018, SM-JIN-0170-2018, SM-JIN-0172-2018, SM-JIN-0174-2018, SM-JIN-0176-2018, SM-JIN-0178-2018, SM-JIN-0180-2018, SM-JIN-0181-2018, SM-JIN-0184-2018, SM-JIN-0186-2018, SM-JIN-0188-2018, SM-JIN-0189-2018, SM-JIN-0192-2018, SM-JIN-0195-2018, SM-JIN-0196-2018, SM-JIN-0199-2018, SM-JIN-0203-2018, SM-JIN-0205-2018, SM-JIN-0207-2018, SM-JIN-0209-2018, SM-JIN-0210-2018, SM-JIN-213/2018 y SM-JIN-0215/2018.

Así como los Juicios Ciudadanos SM-JDC-0629-2018, SM-JDC-0630/2018, SM-JDC-631/2018, SM-JDC-0632/2018 y SM-JDC-0636/2018

Sala Xalapa: SX-JIN-1/2018, SX-JIN-2/2018, SX-JIN-3/2018, SX-JIN-4/2018, SX-JIN-5/2018, SX-JIN-6/2018, SX-JIN-7/2018, SX-JIN-9/2018, SX-JIN-10/2018, SX-JIN-11/2018, SX-JIN-12/2018, SX-JIN-13/2018, SX-JIN-15/2018, SX-JIN-18/2018, SX-JIN-19/2018, SX-JIN-20/2018, SX-JIN-22/2018, SX-JIN-23/2018, SX-JIN-24/2018, SX-JIN-25/2018, SX-JIN-26/2018, SX-JIN-27/2018, SX-JIN-30/2018, SX-JIN-31/2018, SX-JIN-32/2018, SX-JIN-33/2018, SX-JIN-35/2018, SX-JIN-37/2018, SX-JIN-38/2018, SX-JIN-39/2018, SX-JIN-40/2018, SX-JIN-41/2018, SX-JIN-43/2018, SX-JIN-44/2018, SX-JIN-45/2018, SX-JIN-47/2018, SX-JIN-48/2018, SX-JIN-49/2018, SX-JIN-51/2018, SX-JIN-52/2018, SX-JIN-53/2018, SX-JIN-54/2018, SX-JIN-56/2018, SX-JIN-57/2018, SX-JIN-58/2018, SX-JIN-60/2018, SX-JIN-61/2018, SX-JIN-62/2018, SX-JIN-63/2018, SX-JIN-64/2018, SX-JIN-65/2018, SX-JIN-66/2018, SX-JIN-69/2018, SX-JIN-70/2018, SX-JIN-71/2018, SX-JIN-72/2018, SX-JIN-74/2018, SX-JIN-76/2018, SX-JIN-78/2018, SX-JIN-80/2018, SX-JIN-

82/2018, SX-JIN-84/2018, SX-JIN-85/2018, SX-JIN-86/2018, SX-JIN-90/2018, SX-JIN-91/2018, SX-JIN-92/2018, SX-JIN-94/2018, SX-JIN-97/2018, SX-JIN-98/2018, SX-JIN-100/2018, SX-JIN-102/2018, SX-JIN-104/2018, SX-JIN-106/2018, SX-JIN-108/2018, SX-JIN-111/2018, SX-JIN-112/2018, SX-JIN-114/2018, SX-JIN-116/2018, SX-JIN-119/2018, SX-JIN-120/2018, SX-JIN-123/2018, SX-JIN-124/2018, SX-JIN-127/2018, SX-JIN-129/2018, SX-JIN-130/2018, SX-JIN-133/2018, SX-JIN-134/2018, SX-JIN-137/2018, SX-JIN-138/2018, SX-JIN-142/2018, SX-JIN-143/2018, SX-JIN-145/2018, SX-JIN-146/2018, SX-JIN-149/2018, SX-JIN-151/2018, SX-JIN-154/2018, SX-JIN-156/2018, SX-JIN-157/2018, SX-JIN-158/2018, SX-JIN-160/2018, SX-JIN-164/2018, SX-JIN-166/2018, SX-JIN-167/2018, SX-JIN-168/2018, SX-JIN-171/2018, SX-JIN-173/2018, SX-JIN-174/2018, SX-JIN-176/2018, SX-JIN-179/2018, SX-JIN-180/2018, SX-JIN-182/2018, SX-JIN-184/2018, SX-JIN-186/2018, SX-JIN-189/2018, SX-JIN-191/2018, SX-JIN-192/2018, SX-JIN-194/2018, SX-JIN-196/2018, SX-JIN-198/2018, SX-JIN-200/2018, SX-JIN-202/2018,

Así como los Juicios Ciudadanos SX-JDC-611/2018, SX-JDC-612/2018, SX-JDC-626/2018 y SX-JDC-634/2018.

Sala Ciudad de México: SCM-JIN-1/2018, SCM-JIN-2/2018, SCM-JIN-3/2018, SCM-JIN-4/2018, SCM-JIN-5/2018, SCM-JIN-6/2018, SCM-JIN-7/2018, SCM-JIN-8/2018, SCM-JIN-9/2018, SCM-JIN-11/2018, SCM-JIN-12/2018, SCM-JIN-13/2018, SCM-JIN-15/2018, SCM-JIN-16/2018, SCM-JIN-17/2018, SCM-JIN-18/2018, SCM-JIN-19/2018, SCM-JIN-20/2018, SCM-JIN-22/2018, SCM-JIN-23/2018, SCM-JIN-24/2018, SCM-JIN-25/2018, SCM-JIN-27/2018, SCM-JIN-28/2018, SCM-JIN-30/2018, SCM-JIN-32/2018, SCM-JIN-33/2018, SCM-JIN-34/2018, SCM-JIN-35/2018, SCM-JIN-36/2018, SCM-JIN-37/2018, SCM-JIN-38/2018, SCM-JIN-39/2018, SCM-JIN-41/2018, SCM-JIN-42/2018, SCM-JIN-43/2018, SCM-JIN-47/2018, SCM-JIN-48/2018, SCM-JIN-50/2018, SCM-JIN-52/2018, SCM-JIN-54/2018, SCM-JIN-56/2018, SCM-JIN-57/2018, SCM-JIN-58/2018, SCM-JIN-59/2018, SCM-JIN-64/2018, SCM-JIN-65/2018, SCM-JIN-67/2018, SCM-JIN-68/2018, SCM-JIN-70/2018, SCM-JIN-71/2018, SCM-JIN-72/2018, SCM-JIN-74/2018, SCM-JIN-76/2018, SCM-JIN-79/2018, SCM-JIN-82/2018, SCM-JIN-83/2018, SCM-JIN-85/2018, SCM-JIN-89/2018, SCM-JIN-90/2018, SCM-JIN-91/2018, SCM-JIN-94/2018, SCM-JIN-99/2018, SCM-JIN-102/2018, SCM-JIN-105/2018, SCM-JIN-107/2018, SCM-JIN-110/2018, SCM-JIN-111/2018, SCM-JIN-113/2018, SCM-JIN-115/2018, SCM-JIN-119/2018, SCM-JIN-121/2018, SCM-JIN-122/2018, SCM-JIN-124/2018, SCM-JIN-127/2018, SCM-JIN-129/2018, SCM-JIN-131/2018,

SCM-JIN-132/2018, SCM-JIN-134/2018, SCM-JIN-135/2018, SCM-JIN-137/2018, SCM-JIN-140/2018, SCM-JIN-142/2018, SCM-JIN-144/2018, SCM-JIN-147/2018, SCM-JIN-148/2018, SCM-JIN-150/2018, SCM-JIN-152/2018, SCM-JIN-155/2018, SCM-JIN-156/2018, SCM-JIN-158/2018, SCM-JIN-161/2018, SCM-JIN-162/2018, SCM-JIN-164/2018, SCM-JIN-168/2018, SCM-JIN-170/2018, SCM-JIN-172/2018, SCM-JIN-174/2018, SCM-JIN-176/2018, SCM-JIN-179/2018, SCM-JIN-181/2018, SCM-JIN-182/2018, SCM-JIN-183/2018, SCM-JIN-184/2018, SCM-JIN-187/2018, SCM-JIN-189/2018, SCM-JIN-190/2018, SCM-JIN-192/2018, SCM-JIN-195/2018, SCM-JIN-198/2018, SCM-JIN-199/2018, SCM-JIN-201/2018, SCM-JIN-203/2018, SCM-JIN-204/2018, SCM-JIN-206/2018 y SCM-JIN-208/2018.

Sala Toluca: ST-JIN-1/2018, ST-JIN-2/2018, ST-JIN-3/2018, ST-JIN-4/2018, ST-JIN-5/2018, ST-JIN-6/2018, ST-JIN-7/2018, ST-JIN-8/2018, ST-JIN-9/2018, ST-JIN-10/2018, ST-JIN-11/2018, ST-JIN-12/2018, ST-JIN-13/2018, ST-JIN-14/2018, ST-JIN-15/2018, ST-JIN-16/2018, ST-JIN-17/2018, ST-JIN-18/2018, ST-JIN-19/2018, ST-JIN-20/2018, ST-JIN-21/2018, ST-JIN-22/2018, ST-JIN-23/2018, ST-JIN-24/2018, ST-JIN-25/2018, ST-JIN-26/2018, ST-JIN-27/2018, ST-JIN-28/2018, ST-JIN-29/2018, ST-JIN-30/2018, ST-JIN-31/2018, ST-JIN-32/2018, ST-JIN-33/2018, ST-JIN-34/2018, ST-JIN-35/2018, ST-JIN-36/2018, ST-JIN-37/2018, ST-JIN-38/2018, ST-JIN-39/2018, ST-JIN-40/2018, ST-JIN-41/2018, ST-JIN-42/2018, ST-JIN-43/2018, ST-JIN-44/2018, ST-JIN-45/2018, ST-JIN-46/2018, ST-JIN-47/2018, ST-JIN-48/2018, ST-JIN-49/2018, ST-JIN-51/2018, ST-JIN-52/2018, ST-JIN-53/2018, ST-JIN-54/2018, ST-JIN-55/2018, ST-JIN-60/2018, ST-JIN-62/2018, ST-JIN-63/2018, ST-JIN-64/2018, ST-JIN-65/2018, ST-JIN-67/2018, ST-JIN-68/2018, ST-JIN-71/2018, ST-JIN-72/2018, ST-JIN-74/2018, ST-JIN-75/2018, ST-JIN-77/2018, ST-JIN-78/2018, ST-JIN-80/2018, ST-JIN-82/2018, ST-JIN-83/2018, ST-JIN-87/2018, ST-JIN-90/2018, ST-JIN-92/2018, ST-JIN-94/2018, ST-JIN-95/2018, ST-JIN-96/2018, ST-JIN-98/2018, ST-JIN-99/2018, ST-JIN-100/2018, ST-JIN-102/2018, ST-JIN-103/2018, ST-JIN-105/2018, ST-JIN-106/2018, ST-JIN-108/2018, ST-JIN-111/2018, ST-JIN-113/2018, ST-JIN-114/2018, ST-JIN-116/2018, ST-JIN-119/2018, ST-JIN-121/2018, ST-JIN-122/2018, ST-JIN-125/2018, ST-JIN-126/2018, ST-JIN-129/2018, ST-JIN-130/2018, ST-JIN-132/2018, ST-JIN-134/2018, ST-JIN-137/2018, ST-JIN-138/2018, ST-JIN-141/2018, ST-JIN-143/2018, ST-JIN-144/2018, ST-JIN-146/2018, ST-JIN-148/2018, ST-JIN-149/2018, ST-JIN-151/2018, ST-JIN-153/2018, ST-JIN-155/2018, ST-JIN-157/2018, ST-JIN-159/2018, ST-JIN-161/2018, ST-JIN-164/2018, ST-JIN-166/2018, ST-JIN-168/2018, ST-JIN-169/2018, ST-JIN-173/2018, ST-

JIN-175/2018, ST-JIN-177/2018, ST-JIN-179/2018, ST-JIN-181/2018, ST-JIN-183/2018, ST-JIN-187/2018, ST-JIN-188/2018, ST-JIN-190/2018, ST-JIN-192/2018, ST-JIN-195/2018, ST-JIN-196/2018, ST-JIN-198/2018, ST-JIN-200/2018, ST-JIN-203/2018, ST-JIN-205/2018 y ST-JIN-206/2018.

Asimismo, se interpusieron los Recursos de Reconsideración en contra de las sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales, relacionadas con la elección de diputados por ambos principios, siguientes:

SUP-REC-590/2018, SUP-REC-591/2018, SUP-REC-592/2018, SUP-REC-593/2018, SUP-REC-609/2018, SUP-REC-613/2018, SUP-REC-617/2018, SUP-REC-618/2018, SUP-REC-619/2018, SUP-REC-620/2018, SUP-REC-621/2018, SUP-REC-622/2018, SUP-REC-623/2018, SUP-REC-624/2018, SUP-REC-625/2018, SUP-REC-626/2018, SUP-REC-627/2018, SUP-REC-629/2018, SUP-REC-630/2018, SUP-REC-631/2018, SUP-REC-632/2018, SUP-REC-633/2018, SUP-REC-634/2018, SUP-REC-635/2018, SUP-REC-636/2018, SUP-REC-637/2018, SUP-REC-638/2018, SUP-REC-639/2018, SUP-REC-640/2018, SUP-REC-641/2018, SUP-REC-642/2018, SUP-REC-643/2018, SUP-REC-644/2018, SUP-REC-645/2018, SUP-REC-646/2018, SUP-REC-647/2018, SUP-REC-683/2018, SUP-REC-684/2018, SUP-REC-694/2018, SUP-REC-700/2018, SUP-REC-701/2018, SUP-REC-702/2018, SUP-REC-703/2018, SUP-REC-704/2018, SUP-REC-705/2018, SUP-REC-709/2018, SUP-REC-710/2018, SUP-REC-711/2018, SUP-REC-712/2018, SUP-REC-713/2018, SUP-REC-714/2018, SUP-REC-715/2018, SUP-REC-716/2018, SUP-REC-717/2018, SUP-REC-718/2018, SUP-REC-719/2018, SUP-REC-720/2018, SUP-REC-721/2018, SUP-REC-723/2018, SUP-REC-725/2018, SUP-REC-726/2018, SUP-REC-727/2018, SUP-REC-728/2018, SUP-REC-729/2018, SUP-REC-730/2018, SUP-REC-731/2018, SUP-REC-732/2018, SUP-REC-733/2018, SUP-REC-734/2018, SUP-REC-736/2018, SUP-REC-737/2018, SUP-REC-738/2018, SUP-REC-739/2018, SUP-REC-740/2018, SUP-REC-741/2018, SUP-REC-742/2018, SUP-REC-746/2018, SUP-REC-748/2018, SUP-REC-749/2018, SUP-REC-750/2018, SUP-REC-752/2018, SUP-REC-753/2018, SUP-REC-754/2018, SUP-REC-755/2018, SUP-REC-756/2018, SUP-REC-757/2018, SUP-REC-758/2018, SUP-REC-759/2018, SUP-REC-760/2018, SUP-REC-761/2018, SUP-REC-762/2018, SUP-REC-763/2018, SUP-REC-764/2018, SUP-REC-765/2018, SUP-REC-766/2018, SUP-REC-767/2018, SUP-REC-768/2018, SUP-REC-769/2018, SUP-REC-770/2018, SUP-REC-771/2018, SUP-REC-773/2018, SUP-REC-774/2018, SUP-REC-775/2018, SUP-REC-776/2018, SUP-REC-777/2018, SUP-REC-778/2018, SUP-REC-779/2018, SUP-REC-781/2018, SUP-REC-

782/2018, SUP-REC-783/2018, SUP-REC-785/2018, SUP-REC-786/2018, SUP-REC-787/2018, SUP-REC-788/2018, SUP-REC-789/2018, SUP-REC-790/2018, SUP-REC-791/2018, SUP-REC-792/2018, SUP-REC-793/2018, SUP-REC-794/2018, SUP-REC-795/2018, SUP-REC-796/2018, SUP-REC-797/2018, SUP-REC-798/2018, SUP-REC-799/2018, SUP-REC-800/2018, SUP-REC-801/2018, SUP-REC-802/2018, SUP-REC-803/2018, SUP-REC-804/2018, SUP-REC-805/2018, SUP-REC-806/2018, SUP-REC-807/2018, SUP-REC-808/2018, SUP-REC-809/2018, SUP-REC-810/2018, SUP-REC-811/2018, SUP-REC-812/2018, SUP-REC-813/2018, SUP-REC-814/2018, SUP-REC-815/2018, SUP-REC-816/2018, SUP-REC-817/2018, SUP-REC-818/2018, SUP-REC-820/2018, SUP-REC-821/2018, SUP-REC-826/2018, SUP-REC-827/2018, SUP-REC-828/2018, SUP-REC-829/2018, SUP-REC-831/2018, SUP-REC-832/2018, SUP-REC-833/2018, SUP-REC-834/2018, SUP-REC-835/2018, SUP-REC-836/2018, SUP-REC-837/2018, SUP-REC-838/2018, SUP-REC-839/2018, SUP-REC-840/2018, SUP-REC-841/2018, SUP-REC-842/2018, SUP-REC-843/2018, SUP-REC-844/2018, SUP-REC-845/2018, SUP-REC-847/2018, SUP-REC-855/2018, SUP-REC-856/2018, SUP-REC-857/2018, SUP-REC-858/2018, SUP-REC-859/2018, SUP-REC-860/2018, SUP-REC-861/2018, SUP-REC-862/2018, SUP-REC-863/2018, SUP-REC-864/2018, SUP-REC-865/2018, SUP-REC-866/2018, SUP-REC-870/2018, SUP-REC-871/2018, SUP-REC-872/2018, SUP-REC-874/2018, SUP-REC-875/2018, SUP-REC-876/2018, SUP-REC-877/2018, SUP-REC-878/2018, SUP-REC-879/2018, SUP-REC-880/2018, SUP-REC-881/2018, SUP-REC-882/2018, SUP-REC-883/2018, SUP-REC-884/2018, SUP-REC-889/2018, SUP-REC-891/2018, SUP-REC-892/2018, SUP-REC-894/2018, SUP-REC-895/2018, SUP-REC-896/2018, SUP-REC-897/2018, SUP-REC-898/2018, SUP-REC-899/2018, SUP-REC-900/2018, SUP-REC-901/2018, SUP-REC-902/2018, SUP-REC-903/2018 y SUP-REC-907/2018.

Al respecto, las Salas Superior y Regionales, en las sentencias emitidas en los expedientes de los juicios de inconformidad SG-JIN-8/2018, SG-JIN-13/2018, SG-JIN-67/2018, SG-JIN-86/2018, SG-JIN-87/2018, SG-JIN-88/2018, SG-JIN-89/2018, SM-JIN-2-2018, SM-JIN-3-2018, SM-JIN-6-2018, SM-JIN-8-2018, SM-JIN-9-2018, SM-JIN-23-2018, SM-JIN-25-2018, SM-JIN-26-2018, SM-JIN-35-2018, SM-JIN-36-2018, SM-JIN-41-2018, SM-JIN-42-2018, SM-JIN-50-2018, SM-JIN-56-2018, SM-JIN-57-2018, SM-JIN-60-2018, SM-JIN-85-2018, SM-JIN-86-2018, SM-JIN-95-2018, SM-JIN-98-2018, SM-JIN-99-2018, SM-JIN-136-2018, SM-JIN-148-2018, SM-JIN-153-2018, SM-JIN-163-2018, SM-JIN-165-2018, SM-JIN-168-2018, SM-JIN-0170-2018, SX-JIN-2/2018, SX-JIN-9/2018, SX-JIN-40/2018, SX-JIN-41/2018, SX-JIN-

49/2018, SX-JIN-63/2018, SX-JIN-64/2018, SCM-JIN-16/2018, SCM-JIN-17/2018, SCM-JIN-34/2018, SCM-JIN-35/2018, SCM-JIN-39/2018, SCM-JIN-67/2018, SCM-JIN-82/2018, SCM-JIN-83/2018, ST-JIN-5/2018, ST-JIN-6/2018, ST-JIN-28/2018, ST-JIN-33/2018, ST-JIN-34/2018, ST-JIN-47/2018, ST-JIN-62/2018, ST-JIN-63/2018, ST-JIN-64/2018 y ST-JIN-68/2018; el juicio ciudadano SM-JDC-0629-2018; y los recursos de reconsideración SUP-REC-703/2018, SUP-REC-711/2018, SUP-REC-712/2018, SUP-REC-713/2018, SUP-REC-746/2018, SUP-REC-750/2018, SUP-REC-761/2018, SUP-REC-773/2018, SUP-REC-781/2018, SUP-REC-782/2018, SUP-REC-783/2018, SUP-REC-811/2018, SUP-REC-820/2018, SUP-REC-821/2018, SUP-REC-855/2018, SUP-REC-856/2018, SUP-REC-857/2018, SUP-REC-859/2018, SUP-REC-860/2018, SUP-REC-880/2018, SUP-REC-881/2018, SUP-REC-884/2018, SUP-REC-889/2018, SUP-REC-891/2018, SUP-REC-892/2018, SUP-REC-894/2018, SUP-REC-895/2018, SUP-REC-896/2018, SUP-REC-897/2018, SUP-REC-898/2018 y SUP-REC-899/2018, declararon la nulidad o modificación de la votación recibida en diversas casillas, por actualizarse alguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 75, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En consecuencia, las Salas Superior y Regionales modificaron los resultados de la elección de Diputados, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, y determinaron la recomposición de los cómputos distritales respectivos. En este sentido, acorde con el principio de certeza, para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, la votación que obtuvo cada partido político toma en cuenta lo resuelto en las sentencias precisadas.

En razón de lo anterior, con base en las modificaciones de los resultados de las citadas elecciones, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, se hizo el cómputo total por el principio de representación proporcional, lo que dio como resultado que, Encuentro Social, de la elección de senadurías de representación proporcional obtuvo una votación válida emitida de 1,320,283, que es el 2.4315%, y de las diputaciones por el mismo principio, una votación válida emitida de 1,353,499, que equivale al 2.5060%; en el caso de mayoría relativa, obtuvo una votación válida emitida de senadurías de 1,311,337, que es el 2.4373%, y de las diputaciones una votación válida emitida de 1,347,540, que equivale al 2.5100%.

Lo anterior ha quedado firme, es **definitivo** e **inatacable**, derivado de la confirmación de ambos acuerdos por la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, al resolver los múltiples recursos de reconsideración que se promovieron y resolvieron en la sesión pública celebrada el veintiocho de agosto de dos mil ocho, en los que fueron impugnados, respectivamente, los Acuerdos identificados como INE/CG1180/2018 e INE/CG1181/2018, identificados como SUP-REC-934/2018, SUP-REC-935/2018 SUP-REC-936/2018 SUP-REC-937/2018, SUP-REC-938/2018, SUP-REC-939/2018, SUP-REC-940/2018, SUP-REC-941/2018, SUP-REC-942/2018, SUP-REC-943/2018, SUP-REC-944/2018, SUP-REC-945/2018, SUP-REC-946/2018, SUP-REC-947/2018, SUP-REC-948/2018, SUP-REC-949/2018, SUP-REC-950/2018, SUP-REC-951/2018, SUP-REC-952/2018, SUP-REC-953/2018, SUP-REC-955/2018, SUP-REC-956/2018, SUP-REC-957/2018, SUP-REC-958/2018, SUP-REC-959/2018, SUP-REC-960/2018, SUP-REC-961/2018, SUP-REC-962/2018, SUP-REC-963/2018, SUP-REC-964/2018, SUP-REC-965/2018, SUP-REC-967/2018, SUP-REC-968/2018, SUP-REC-969/2018, SUP-REC-971/2018, SUP-REC-972/2018, SUP-REC-973/2018, SUP-REC-974/2018, SUP-REC-975/2018, SUP-REC-976/2018, SUP-REC-977/2018, SUP-REC-978/2018, SUP-REC-979/2018, SUP-REC-980/2018, SUP-REC-981/2018, SUP-REC-982/2018, SUP-REC-984/2018, SUP-REC-1003/2018, SUP-REC-1005 y SUP-REC-1022/2018.

En ese orden de ideas, las pruebas aportadas por el licenciado Berlín Rodríguez Soria, tendentes a acreditar que Encuentro Social sí obtuvo el porcentaje mínimo legal de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el uno de julio de dos mil dieciocho, mismas que se encuentran concatenadas con los argumentos en ese sentido; en razón de que los resultados de las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados federales son firmes, derivado de las resoluciones que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como instancia final, ha resuelto en definitiva, no permiten a esta autoridad hacer un pronunciamiento al respecto, ya que sólo está facultada legal y constitucionalmente para verificar si se acredita o no la pérdida del registro como Partido Político Nacional Encuentro Social, respecto de la votación válida emitida con carácter firme e inamovible.

Es decir, la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el uno de julio de dos mil dieciocho, no es objeto de prueba por no ser hechos controvertibles; sólo fue materia de la audiencia, la verificación que esta autoridad hizo de la no obtención, por parte de Encuentro Social, de por

lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria pasada.

Lo anterior se robustece, si se analizan las pruebas identificadas con los números 1, 2, 3, 4 y 11, consistentes en documentales relativas a la solicitud de apertura de paquetes que se dice no fueron aperturados; las actas de sesión de los 300 Distritos electorales del país, en la que consten los resultados firmes y definitivos de todas y cada una de las casillas, en relación a la votación de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa y representación proporcional, así como la votación de Presidente de la República; copia certificada de las actas de cómputo distrital de los 300 Distritos electorales del país; y las copias certificadas de las actas de escrutinio y cómputo y del cuadernillo de trabajo de todas y cada una de las casillas, en las elecciones federales; todas relativas a los resultados de las elecciones federales pasadas que son firmes, por así haberse avalado por la autoridad jurisdiccional y, por ende, no son objeto de prueba al no ser controvertibles, lo que incluso se ratifica indubitablemente con la diversa probanza identificada como número 5, relativa a todas y cada una de las sentencias recaídas a los juicios de inconformidad y recursos de reconsideración, relativos a las elecciones de diputados, senadores y Presidente de la República. Es decir, con dichas pruebas, no se controvierte la materia de la audiencia, que fue la verificación de la no obtención, por parte de Encuentro Social, de por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el uno de julio de dos mil dieciocho.

Por lo que hace a la prueba técnica identificada con el número 6, consistente en la base de captura en donde consten todos y cada uno de los resultados definitivos y firmes de cada una de las casillas, tomados tanto de los cómputos distritales o en su caso de las sentencias firmes; en primer término, su ofrecimiento no tiene como objeto probar un hecho, sino como el oferente lo señala, pretende tener certeza de los resultados de la votación firme de la elección federal pasada; lo que además, no es un hecho controvertido, por la firmeza otorgada por los órganos jurisdiccionales competentes.

La pericial en mercadotecnia política, no puede admitirse y, por ende, valorarse, porque ésta sólo puede ser ofrecida y admitida respecto de impugnaciones no vinculadas al Proceso Electoral y a sus resultados; además, para su ofrecimiento, deben cumplirse, entre otros, los requisitos de exhibir el cuestionario respectivo; especificarse lo que se pretende acreditar;

y señalarse el nombre del perito que se proponga y exhibir su acreditación técnica, lo que en la especie no se hizo.

Las pruebas 8, 9 y 10, relativas a notas de prensa realizadas por el Consejero Presidente de este Instituto y videos de entrevistas realizadas a la misma persona, en las que señaló que se debía votar de forma sencilla y que afectó en el resultado de la votación válida emitida; tampoco es un hecho controvertido, ya que, como en el caso de las otras pruebas, el resultado de la elección es firme y no está sujeto a controversia, producto, como ya se dijo, de las determinaciones adoptadas al respecto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Respecto de las pruebas consistentes en los informes que se presentaron a la Comisión de Fiscalización de este Instituto; el Reglamento del Grupo parlamentario de Encuentro Social, tanto de la bancada de senadores como de diputados; los 55 informes de la transmisión de tiempos del Estado en radio y televisión registrados por Encuentro Social; la copia del acuse de recibo del oficio ES/CDN/INE/RP/1011/2018 de fecha 17 de agosto de 2018, dirigido al Director Ejecutivo de Organización Electoral del Instituto; las copias fotostáticas de un libro y los documentos básicos de Encuentro Social, no se relacionan con la materia de la audiencia otorgada, que fue la verificación del porcentaje de la votación válida emitida y que es firme, la cual obtuvo Encuentro Social en la elección federal ordinaria celebrada el uno de julio de dos mil dieciocho. De dichas pruebas sólo se desprende que Encuentro Social, rindió los informes en materia de fiscalización; que cuenta con normatividad interna respecto de sus grupos parlamentarios; que ejerció su derecho y prerrogativa en materia de radio y televisión, basado en una estrategia política, y que hizo una petición al Director Ejecutivo de Organización Electoral, pero no acredita que obtuvo el tres por ciento de la votación válida emitida -que es firme e inatacable- en la elección federal ordinaria celebrada el uno de julio de dos mil ocho, para no perder su registro como Partido Político Nacional.

Por lo que hace a la prueba presuncional en su doble aspecto, así como la instrumental de actuaciones, no favorece a la representada del oferente, porque no se genera convicción sobre los hechos afirmados, relativos a los resultados de la elección electoral federal, los cuales han sido validados por las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismos que traen como consecuencia que Encuentro Social pierda su registro como Partido Político Nacional, al no haber obtenido, por lo menos, el tres por

ciento de la votación válida emitida en la elección celebrada el uno de julio de dos mil dieciocho.

Ahora bien, en las páginas 109 a 111, del escrito de cuenta, el licenciado Berlín Rodríguez Soria, en ejercicio de la citada garantía de audiencia, formula 10 interrogantes que tienen por objeto buscar la viabilidad de la conservación del registro de Encuentro Social como Partido Político Nacional, al considerar injusto que lo pierda y a la vez haya obtenido 56 diputados federales y 8 senadores; es decir, al contar con representación en el Congreso de la Unión, lo que no previó el legislador.

En atención a lo anterior, es de señalarse que, en el artículo 95, numeral 4, de la Ley General de Partidos Políticos, se dispone que la pérdida del registro de un partido político no tiene efectos en relación con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido en las elecciones según el principio de mayoría relativa. Artículo que se encuentra previsto en el título denominado “De la pérdida del registro de los partidos políticos”, por lo que se puede afirmar que el legislador federal sí previó el supuesto en el que se ubica Encuentro Social; es decir, que pierda su registro como Partido Político Nacional, al no obtener por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria pasada, pero esa circunstancia no tiene efectos en relación con los legisladores que tiene en el Congreso de la Unión, al haber sido postulados por el otrora fuerza política.

Debido a lo anterior, se concluye que, contrario a la afirmación que se hace como introducción y razones de las interrogantes de cuenta, no existe un escenario inédito y novedoso; porque sí está previsto legalmente que un partido político haya obtenido el triunfo de sus candidatos a cargos de legislador federal, sin embargo, no haya obtenido, por lo menos, el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria y, por ende, sea procedente la pérdida de su registro como Partido Político Nacional.

Por lo cual, tomando en consideración que los argumentos ofrecidos han sido desvirtuados por esta autoridad administrativa, y que las pruebas ofrecidas resultan inconducentes para la pretensión del partido político, en términos de la tesis que se cita a continuación, es procedente resolver sobre la conservación o pérdida de registro de Encuentro Social.

Época: Novena Época
Registro: 184594
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XVII, Marzo de 2003
Materia(s): Civil
Tesis: XI.2o. J/26
Página: 1607

PRUEBAS. SON INCONDUCTENTES SI TIENEN POR OBJETO DEMOSTRAR HECHOS AJENOS A LA LITIS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).

De conformidad con el principio de congruencia que rige en materia de pruebas, previsto en los artículos 366 y 372 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, todo medio de convicción que se ofrezca y desahogue en el proceso debe guardar relación con algún punto controvertido, por lo que no es dable jurídicamente aportar pruebas para acreditar aspectos que no son tema de discusión entre las partes; de ahí que su desestimación por inconducentes por parte de la responsable, no resulte violatoria de garantías.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 824/99. Amador Cendejas Solorio. 19 de enero de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Sahuer Hernández. Secretario: Gilberto Díaz Ortiz.

Amparo directo 37/2000. Esperanza González Manzo. 10 de febrero de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Murillo Delgado. Secretaria: Libertad Rodríguez Verduzco.

Amparo directo 86/2000. Salvador Ventura Cervantes. 2 de marzo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Murillo Delgado. Secretaria: Libertad Rodríguez Verduzco.

Amparo directo 720/2001. Juan Carlos Bernal Rodríguez. 22 de noviembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Murillo Delgado. Secretaria: Libertad Rodríguez Verduzco.

Amparo directo 849/2002. Juan Manuel Sánchez García de León. 22 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Murillo Delgado. Secretaria: Ileri Amezcua Estrada.

8. Como se ha mencionado, la Junta General Ejecutiva, emitió el Acuerdo mencionado en el Antecedente X, mismo que se agrega al presente Dictamen como parte de él, en el que se declaró que Encuentro Social se ubica en el supuesto establecido en el artículo 94, párrafo 1, incisos b) y c), de la LGPP, al no haber obtenido en la elección ordinaria inmediata anterior el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección para la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, senadurías y diputaciones federales por ambos principios del primero de julio de dos mil dieciocho.

Dicha declaratoria se fundó en los resultados de los cómputos y declaraciones de validez respectivas de los Consejos del Instituto, así como en las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto es, las cifras relativas a los votos de la elección consideraron, entre otros, la deducción de los sufragios derivadas de los cómputos distritales y de las sentencias de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En ese sentido, una vez notificada la declaratoria en comentario y valorados los argumentos hechos valer por el partido político afectado, este Consejo General arriba a la conclusión de que debe confirmarse dicho acuerdo y, en consecuencia, aprobarse el presente Dictamen.

Asimismo, por lo expuesto en los considerandos anteriores los argumentos vertidos por Encuentro Social no son suficientes para contrarrestar lo dispuesto por dicha Junta General Ejecutiva o para otorgarle la razón. En consecuencia, se concluye que Encuentro Social, en efecto, se ubica en el supuesto establecido en los artículos 41, párrafo segundo, Base I, párrafo cuarto de la Constitución, en relación con el artículo 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la LGPP, por lo que es procedente la declaratoria de pérdida de registro de dicho instituto político.

9. Conforme a lo señalado por el artículo 96, párrafo 1 de la LGPP, al partido político que pierda su registro le será cancelado el mismo y perderá todos los derechos y prerrogativas que establece dicha Ley.
10. Según lo establecido en el artículo 96, párrafo 2 de la LGPP, *“la cancelación o pérdida del registro extinguirá la personalidad jurídica del partido político, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización establece esta Ley, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio”*.
11. Si bien es cierto que el artículo 96, párrafo 2 de la LGPP señala que se extingue la personalidad jurídica del Partido Político Nacional que pierda su registro, también lo es que, para efectos de fiscalización, se prorroga la personalidad de los dirigentes hasta la conclusión del proceso de liquidación del patrimonio. No obstante, a efecto de dotar de certeza sobre las instancias facultadas para el ejercicio del derecho establecido en el artículo 95, párrafo 5 de la LGPP, este Consejo General considera necesario aplicar por analogía lo establecido en el párrafo 2 del artículo 96 de dicha Ley. Esto es, a fin de prorrogar las atribuciones y la integración de los órganos directivos del extinto partido político únicamente para tales fines.

En ese sentido, el artículo 55, párrafo 1, inciso i) de la LGIPE, dispone que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos tiene entre sus atribuciones llevar el libro de registro de los integrantes de los órganos directivos de los partidos políticos, a nivel nacional y estatal, por lo que, para efectos de lo mencionado en el párrafo anterior, serán los integrantes de los órganos estatutarios inscritos en el libro de registro que lleva la referida Dirección Ejecutiva a quienes se les prorroguen sus atribuciones de conformidad con las facultades establecidas en los Estatutos y Reglamentos registrados y vigentes al tres de septiembre de dos mil dieciocho.

En atención a los Antecedentes y Considerandos expresados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 41, párrafo segundo, bases I, último párrafo y V, apartado A, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, párrafo 1; 30, párrafo 2; 34; 48, párrafo 1, inciso i); 55, párrafo 1, inciso i) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 94,

párrafo 1, incisos b) y c); y 96 de la Ley General de Partidos Políticos, y en ejercicio de la atribución que le confieren los artículos 44, párrafo 1, inciso m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; el Consejo General

R E S U E L V E

PRIMERO. Se aprueba el Dictamen emitido por la Junta General Ejecutiva de este Instituto relativo a la pérdida de registro del Partido Político Nacional denominado Encuentro Social, al no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho.

SEGUNDO.- Se declara la pérdida de registro como Partido Político Nacional, de Encuentro Social, en virtud de que al no haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho, se ubicó en la causal prevista en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la Ley General de Partidos Políticos.

TERCERO.- A partir del día siguiente a la aprobación del presente Dictamen, Encuentro Social pierde todos los derechos y prerrogativas que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Partidos Políticos, y demás normatividad aplicable, con excepción de las prerrogativas públicas correspondientes al resto del ejercicio fiscal 2018, que deberán ser entregadas por este Instituto al Interventor respectivo, de conformidad con lo establecido por el artículo 389 del Reglamento de Fiscalización.

CUARTO.- Para efectos del ejercicio del derecho que le otorga el artículo 95, párrafo 5, de la Ley General de Partidos Políticos, se prorrogan las atribuciones y la integración de los órganos estatutarios estatales de Encuentro Social, inscritos en el libro de registro que lleva la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, con las facultades establecidas en los Estatutos y Reglamentos registrados ante esta autoridad.

Asimismo, para efectos de lo establecido en el numeral 5 de los Lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen los otrora Partidos Políticos Nacionales para optar por el registro como partido político local establecido en el artículo 95, párrafo 5 de la Ley General De Partidos Políticos, deberá entenderse que el plazo para la presentación de la solicitud ante el Organismo Público Local, corre a partir de que el presente Dictamen haya quedado firme o, en su caso, a partir de que haya concluido el proceso local extraordinario de la entidad de que se trate.

QUINTO.- Encuentro Social deberá cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización establecen la Ley General de Partidos Políticos, el Reglamento de Fiscalización y demás normatividad aplicable, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.

SEXTO.- Notifíquese a Encuentro Social e inscribise el presente Dictamen en el libro correspondiente.

SÉPTIMO.- Hágase del conocimiento de todas y cada una de las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales del Instituto el presente Dictamen, para los efectos a que haya lugar.

OCTAVO.- Dese vista a la Comisión de Fiscalización para efectos de lo establecido en el artículo 97 de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los diversos 192, párrafo 1, inciso ñ), y 199, párrafo 1, inciso i) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

NOVENO.- Se instruye al Comité de Radio y Televisión para que emita el Acuerdo por el que se modifica la pauta para el segundo semestre del periodo ordinario 2018 con el objeto de reasignar los tiempos del Estado entre los Partidos Políticos Nacionales con derecho a ello a partir de la siguiente orden de transmisión. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos para que notifique a los concesionarios de radio y televisión sobre la pérdida de registro señalada, a fin de que se tomen las medidas necesarias para la sustitución de los promocionales pautados por el otrora partido político por promocionales institucionales en tanto surte efectos la modificación de la pauta señalada.

DÉCIMO.- Comuníquese el presente Dictamen a los Organismos Públicos Locales, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con dichos órganos, para los efectos legales conducentes.

DÉCIMO PRIMERO.- Publíquese el presente Dictamen en el Diario Oficial de la Federación, así como en la página de Internet de este Instituto.

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE PÉRDIDA DE REGISTRO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO ENCUENTRO SOCIAL, EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR LO MENOS EL TRES POR CIENTO DE LA VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA EN LA ELECCIÓN FEDERAL ORDINARIA CELEBRADA EL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO

ANTECEDENTES

- I. Registro de Encuentro Social.** El Partido Político Nacional denominado Encuentro Social (en adelante Encuentro Social), obtuvo su registro ante el Instituto Nacional Electoral, (en adelante INE), mediante Resolución INE/CG96/2014, aprobada el nueve de julio de dos mil catorce y publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de agosto del mismo año. En tal virtud, el partido político mencionado, al contar con registro vigente ante este Instituto, participó en la preparación, desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral Federal ordinario correspondiente al año dos mil dieciocho, y ejerció su derecho a postular candidaturas a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, senadurías y diputaciones federales por ambos principios conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución) y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante LGIPE).
- II. Consulta formulada por Encuentro Social.** El once de mayo de dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria, fue aprobado el “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se da respuesta a las consultas formuladas por el Partido Encuentro Social”, identificado como INE/CG452/2018 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de agosto del presente año. El acuerdo, que no fue impugnado, respondió consultas respecto al porcentaje de votación requerido para mantener el registro de un Partido Político Nacional, sobre la asignación de una diputación federal por el principio de representación proporcional cuya

fórmula contienda simultáneamente por el principio de mayoría relativa y obtenga el triunfo; y respecto al efecto que se produce por haber alcanzado el tres por ciento de la votación válida emitida durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018.

- III. **Jornada Electoral Federal 2018.** El primero de julio de dos mil dieciocho se celebraron elecciones ordinarias federales para elegir Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadurías y diputaciones federales. En ellas participaron los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, MORENA y Encuentro Social, así como las coaliciones denominadas: “Por México al Frente” integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano; “Todos por México” integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza; y “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos del Trabajo, MORENA y Encuentro Social.
- IV. **Segunda consulta formulada por Encuentro Social.** En sesión ordinaria celebrada el dieciocho de julio de dos mil dieciocho, se aprobó el “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se da respuesta a la consulta formulada por el partido denominado Encuentro Social”, identificado con la clave INE/CG651/2018, relativo a la reinterpretación del concepto de votación válida emitida para efectos del artículo 41, Base I, párrafo cuarto de la Constitución, excluyendo de la misma los votos emitidos para candidatos independientes.
- V. **Recurso de apelación promovido por Encuentro Social.** El veintiuno de julio de dos mil dieciocho, Encuentro Social interpuso recurso de apelación, a efecto de controvertir el Acuerdo INE/CG651/2018, mismo que fue resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el tres de agosto del año en curso, confirmando el acto impugnado.
- VI. **Resultados del Proceso Electoral Federal 2017-2018.** Con fecha diecinueve de agosto de dos mil dieciocho, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyó la resolución de los medios de impugnación interpuestos por los partidos políticos y las coaliciones respecto

a los resultados de las elecciones ordinarias federales para elegir Presidente, senadurías y diputaciones, realizadas el primero de julio de dos mil dieciocho.

- VII.** Con fechas veintiuno y veintidós de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficios INE/DEOE/1998/2018 e INE/DEOE/2001/2018, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral remitió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos los resultados de las elecciones ordinarias federales para elegir Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadurías y diputaciones federales, conforme a lo siguiente:

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PARTIDO POLÍTICO	VOTACIÓN TOTAL EMITIDA	PORCENTAJE
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	9,996,514	17.6582
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	7,677,180	13.5613
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA	1,602,715	2.8311
PARTIDO DEL TRABAJO	3,396,805	6.0003
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	1,051,480	1.8574
MOVIMIENTO CIUDADANO	1,010,891	1.7857
NUEVA ALIANZA	561,193	0.9913
MORENA	25,186,577	44.4906
ENCUENTRO SOCIAL	1,530,101	2.7028
JAIME HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERÓN	2,961,732	5.2317
CANDIDATURAS NO REGISTRADAS	31,982	0.0565
VOTOS NULOS	1,603,857	2.8331
TOTAL	56,611,027	100

SENADURÍAS DE MAYORÍA RELATIVA

PARTIDO POLÍTICO	VOTACIÓN TOTAL EMITIDA	PORCENTAJE
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	9,852,753	17.5471
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	8,961,369	15.9596
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA	2,973,479	5.2956
PARTIDO DEL TRABAJO	2,149,566	3.8283
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	2,514,578	4.4783
MOVIMIENTO CIUDADANO	2,621,317	4.6684

PARTIDO POLÍTICO	VOTACIÓN <u>TOTAL</u> EMITIDA	PORCENTAJE
NUEVA ALIANZA	1,299,733	2.3147
MORENA	21,013,123	37.4231
ENCUENTRO SOCIAL	1,311,337	2.3354
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES	1,105,624	1.9691
CANDIDATURAS NO REGISTRADAS	30,526	0.0544
VOTOS NULOS	2,316,781	4.1260
TOTAL	56,150,186	100

SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

PARTIDO POLÍTICO	VOTACIÓN <u>TOTAL</u> EMITIDA	PORCENTAJE
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	9,969,069	17.5903
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	9,011,312	15.9003
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA	2,982,826	5.2631
PARTIDO DEL TRABAJO	2,164,088	3.8185
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	2,527,710	4.4601
MOVIMIENTO CIUDADANO	2,654,085	4.6831
NUEVA ALIANZA	1,306,792	2.3058
MORENA	21,256,238	37.5063
ENCUENTRO SOCIAL	1,320,233	2.3296
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES	1,105,624	1.9509
CANDIDATURAS NO REGISTRADAS	31,812	0.0561
VOTOS NULOS	2,343,942	4.1358
TOTAL	56,673,781	100

DIPUTACIONES DE MAYORÍA RELATIVA

PARTIDO POLÍTICO	VOTACIÓN <u>TOTAL</u> EMITIDA	PORCENTAJE
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	10,033,157	17.9334
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	9,271,950	16.5728
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA	2,959,800	5.2904
PARTIDO DEL TRABAJO	2,201,192	3.9345
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	2,685,677	4.8004
MOVIMIENTO CIUDADANO	2,473,056	4.4204

PARTIDO POLÍTICO	VOTACIÓN <u>TOTAL</u> EMITIDA	PORCENTAJE
NUEVA ALIANZA	1,385,421	2.4763
MORENA	20,790,623	37.1614
ENCUENTRO SOCIAL	1,347,510	2.4086
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 1 ¹	534,975	0.9562
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 2 ²	3,989	0.0071
CANDIDATURAS NO REGISTRADAS	32,611	0.0583
VOTOS NULOS	2,226,781	3.9802
TOTAL	55,946,772	100

DIPUTACIONES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

PARTIDO POLÍTICO	VOTACIÓN <u>TOTAL</u> EMITIDA	PORCENTAJE
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	10,093,012	17.9321
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	9,307,233	16.5361
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA	2,967,452	5.2722
PARTIDO DEL TRABAJO	2,210,988	3.9282
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	2,694,654	4.7876
MOVIMIENTO CIUDADANO	2,484,185	4.4136
NUEVA ALIANZA	1,390,882	2.4712
MORENA	20,968,859	37.2551
ENCUENTRO SOCIAL	1,353,499	2.4047
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 1 ³	534,975	0.9505
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 2 ⁴	3,989	0.0071
CANDIDATURAS NO REGISTRADAS	32,938	0.0585
VOTOS NULOS	2,241,811	3.9830
TOTAL	56,284,477	100

¹ Candidato Independiente 1, comprende la suma de votos de los candidatos independientes que contendieron como únicos o fueron registrados en primer lugar.

² Candidato Independiente 2, comprende la suma de votos de los candidatos independientes que fueron registrados en segundo lugar en el mismo distrito.

³ Candidato Independiente 1, comprende la suma de votos de los candidatos independientes que contendieron como únicos o fueron registrados en primer lugar.

⁴ Candidato Independiente 2, comprende la suma de votos de los candidatos independientes que fueron registrados en segundo lugar en el mismo distrito.

- VIII.** En sesión extraordinaria de fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del INE efectuó el cómputo total, la declaración de validez de la elección y la asignación de senadurías y diputaciones federales por el principio de representación proporcional mediante los Acuerdos INE/CG1180/2018 e INE/CG1181/2018.
- IX.** Con fecha veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió los Recursos de Reconsideración interpuestos en contra de los Acuerdos mencionados en el numeral que antecede, con lo que se confirmó el contenido de los mismos.

C O N S I D E R A N D O

Atribuciones del Instituto Nacional Electoral

- 1.** En términos de lo preceptuado en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo primero, de la Constitución en relación con los artículos 29, párrafo 1 y 30, párrafo 2 de la LGIPE, el INE es un organismo público autónomo que tiene como función estatal la organización de las elecciones y es autoridad en la materia, cuyas actividades se rigen por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
- 2.** El artículo 34 de la LGIPE, dispone que el Consejo General; la Presidencia del Consejo General; la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva, constituyen los órganos centrales del INE.

Competencia de la Junta General Ejecutiva

- 3.** Los artículos 47 y 49, de la LGIPE señalan que la Junta será presidida por el Presidente del Consejo General y se integrará con el Secretario Ejecutivo y con los directores ejecutivos del Registro Federal de Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, del Servicio Profesional Electoral Nacional, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Administración, así como los titulares de la Unidad Técnica de

Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales; el Contralor General podrá participar, a convocatoria del Consejero Presidente. Asimismo, el Secretario Ejecutivo coordina la Junta, conduce la administración y supervisa el desarrollo adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto.

4. El artículo 48, párrafo 1, inciso i) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que la Junta debe elaborar la declaratoria sobre la pérdida de registro y el Proyecto de Resolución que deberá someter a consideración del Consejo General.

Causales de pérdida de registro como Partido Político Nacional

5. En términos de lo previsto en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo de la Constitución, “el partido político que no obtenga, al menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.
6. El artículo 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la Ley General de Partidos Políticos (en adelante LGPP), establece como causal de pérdida de registro de un Partido Político Nacional la de no obtener por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputaciones, senadurías o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, si participa solo o coaligado.
7. Al respecto, el Punto Primero del Acuerdo del Consejo General del INE, por el que se da respuesta a las consultas formuladas por el Partido Encuentro Social, identificado con el número INE/CG452/2018, aprobado por dicho órgano colegiado en sesión extraordinaria celebrada el once de mayo del año en curso y publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de mayo del mismo año, estableció que los Partidos Políticos Nacionales conservarán su registro ante el INE, al obtener por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida, indistintamente, en la elección de diputados federales, o en la de senadores o en la de Presidente de la República, a partir de la interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 41,

párrafo segundo, Base I, párrafo cuarto de la Constitución y 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la LGPP.

8. De conformidad con lo establecido en el artículo 95, párrafo 1 de la LGPP, para la pérdida de registro a que se refieren los incisos a) al c) del párrafo 1 del citado artículo 94 de dicha ley, la Junta General Ejecutiva del INE emitirá la declaratoria correspondiente, misma que deberá fundarse en los resultados de los cómputos y declaraciones de validez respectivas de los Consejos del INE, así como en las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto es, las cifras relativas a los votos de la elección consideran, entre otros, la deducción de los sufragios derivadas de los cómputos distritales y de las sentencias de las salas que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
9. Cabe mencionar que, conforme a lo establecido en los artículos 44, párrafo 1, inciso m) y 48, párrafo 1, inciso i) de la LGIPE, en relación con lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las sentencias identificadas con los acrónimos SUP-JDC-1710/2015 y acumulados y SUP-RAP-654/2015 y acumulados, la Junta General Ejecutiva únicamente debe elaborar la declaratoria sobre la pérdida de registro y el Proyecto de Resolución que deberá someter a consideración del Consejo General, para que sea éste quien resuelva en definitiva si un Partido Político Nacional pierde o conserva su registro como tal.

Validez de la elección

10. Conforme a lo previsto en el artículo 225, párrafos 1, 5 y 6 de la LGIPE, de acuerdo con los cómputos efectuados por los Consejos del INE y con las resoluciones emitidas en última instancia por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue declarada la validez de la elección ordinaria federal celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho.

Votación válida emitida

11. Acorde con lo establecido en el artículo 15, párrafo 1 de la LGIPE en relación con lo determinado por el Consejo General mediante Acuerdo identificado con la clave INE/CG641/2015, aprobado en sesión extraordinaria el doce de

agosto de dos mil quince y confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia dictada en el expediente SUP-RAP-430/2015, se entiende por votación válida emitida la que resulte de deducir los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados de la suma de todos los votos depositados en las urnas.

12. Sirve de sustento para lo anterior, lo sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Tesis LIII/2016, que a la letra señala:

*VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA. ELEMENTOS QUE LA CONSTITUYEN PARA QUE UN PARTIDO POLÍTICO CONSERVE SU REGISTRO.-De la interpretación de los artículos 41, fracción I, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15, apartados 1 y 2, y 437, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 94, párrafo 1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos, se advierte que, los partidos políticos a fin de conservar su registro deben obtener al menos el 3% de la votación válida emitida en la última elección en la que participen. Ahora bien, a través de la figura de las candidaturas independientes, los ciudadanos pueden participar para ser votados a cargos de elección popular. Por ello, **los votos emitidos a favor de las candidaturas independientes son plenamente válidos, con impacto y trascendencia en las elecciones uninominales, por lo que deben computarse para efectos de establecer el umbral del 3% para la conservación del registro de un partido político, en virtud de que éste es determinado por la suma de voluntades ciudadanas a través del sufragio, en un porcentaje suficiente que soporte la existencia de un instituto político. De ahí que, para efectos de la conservación del registro de un Partido Político Nacional la votación válida emitida se integrará con los votos depositados a favor de los diversos partidos políticos y de las candidaturas independientes, que son los que cuentan para elegir presidente, senadores y diputados, deduciendo los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados.***

Quinta Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-430/2015.—Recurrente: Partido del Trabajo.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.—19 de agosto de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanís Figueroa.—Secretarios: Roberto Jiménez Reyes y Carlos Vargas Baca.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el quince de junio de dos mil dieciséis, aprobó por unanimidad de votos, con la ausencia del Magistrado Manuel González Oropeza, la tesis que antecede.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 141 y 142.⁵

13. Es por ello que, al deducir los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados de la votación total emitida, se obtiene que Encuentro Social no alcanzó cuando menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones, de conformidad con las cifras señaladas en el antecedente VI del presente Acuerdo, según se desprende de los cómputos nacional y distritales y de las resoluciones que en última instancia emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por ese motivo, se coloca en el supuesto establecido en el artículo 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la LGPP como consta en los cuadros siguientes:

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS		
PARTIDO POLÍTICO Y CANDIDATO	VOTACIÓN <u>VÁLIDA</u>	PORCENTAJE
INDEPENDIENTE	EMITIDA	
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	9,996,514	18.1837
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	7,677,180	13.9648
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA	1,602,715	2.9153
PARTIDO DEL TRABAJO	3,396,805	6.1788
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	1,051,480	1.9126
MOVIMIENTO CIUDADANO	1,010,891	1.8388
NUEVA ALIANZA	561,193	1.0208
MORENA	25,186,577	45.8145
ENCUENTRO SOCIAL	1,530,101	2.7833
JAIME HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERÓN	2,961,732	5.3874
TOTAL	54,975,188	100%

⁵ Énfasis añadido.

SENADURÍAS DE MAYORÍA RELATIVA

PARTIDO POLÍTICO Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES	VOTACIÓN <u>VÁLIDA</u> EMITIDA	PORCENTAJE
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	9,852,753	18.3127
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	8,961,369	16.6559
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA	2,973,479	5.5266
PARTIDO DEL TRABAJO	2,149,566	3.9953
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	2,514,578	4.6737
MOVIMIENTO CIUDADANO	2,621,317	4.8721
NUEVA ALIANZA	1,299,733	2.4157
MORENA	21,013,123	39.0558
ENCUENTRO SOCIAL	1,311,337	2.4373
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES	1,105,624	2.0549
TOTAL	53,802,879	100

SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

PARTIDO POLÍTICO Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES	VOTACIÓN <u>VÁLIDA</u> EMITIDA	PORCENTAJE
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	9,969,069	18.3599
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	9,011,312	16.5960
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA	2,982,826	5.4934
PARTIDO DEL TRABAJO	2,164,088	3.9856
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	2,527,710	4.6553
MOVIMIENTO CIUDADANO	2,654,085	4.8880
NUEVA ALIANZA	1,306,792	2.4067
MORENA	21,256,238	39.1473
ENCUENTRO SOCIAL	1,320,283	2.4315
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES	1,105,624	2.0362
TOTAL	54,298,027	100

DIPUTACIONES DE MAYORÍA RELATIVA

PARTIDO POLÍTICO Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES	VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA	PORCENTAJE
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	10,033,157	18.6881
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	9,271,950	17.2703
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA	2,959,800	5.5130
PARTIDO DEL TRABAJO	2,201,192	4.1000
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	2,685,677	5.0024
MOVIMIENTO CIUDADANO	2,473,056	4.6064
NUEVA ALIANZA	1,385,421	2.5805
MORENA	20,790,623	38.7254
ENCUENTRO SOCIAL	1,317,340	2.5100
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 1	534,975	0.9965
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 2	3,989	0.0074
TOTAL	53,687,380	100

DIPUTACIONES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

PARTIDO POLÍTICO Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES	VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA	PORCENTAJE
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	10,093,012	18.6874
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	9,307,233	17.2325
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA	2,967,452	5.4943
PARTIDO DEL TRABAJO	2,210,988	4.0937
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	2,694,654	4.9892
MOVIMIENTO CIUDADANO	2,484,185	4.5995
NUEVA ALIANZA	1,390,882	2.5752
MORENA	20,968,859	38.8242
ENCUENTRO SOCIAL	1,353,499	2.5060
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 1	534,975	0.9905
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 2	3,989	0.0074

14. Conforme a los considerandos 3, 4 y 9 del presente Acuerdo, esta Junta General debe someter a consideración del Consejo General la presente declaratoria y elaborar el Proyecto de Resolución respectivo, previa garantía del derecho de audiencia del partido afectado.
15. En este sentido debe darse vista a Encuentro Social con esta declaratoria a través de su representación ante el Consejo General del INE, para que en un término de setenta y dos horas alegue lo que a su derecho convenga mediante escrito que presente ante el Secretario Ejecutivo del INE. Una vez fenecido dicho plazo, se elaborará el Proyecto de Resolución valorando la respuesta que, en su caso, se haya presentado, a fin de estar en condiciones de que esta Junta General Ejecutiva apruebe someterlo al Consejo General.

En atención a los antecedentes y consideraciones expresados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Bases I y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15, párrafo 1; 29, párrafo 1, 30, párrafo 2, 34, y 225, párrafos 1, 5 y 6 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la Ley General de Partidos Políticos; así como en los resultados de los cómputos y declaraciones de validez respectivas de los Consejos del Instituto Nacional Electoral y en las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictadas en los expedientes SUP-JDC-1710/2015 y acumulados y SUP-RAP-654/2015 y acumulados; y en el ejercicio de la atribuciones que le confieren los artículos 48, párrafos 1, incisos i) y o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 95 de la Ley General de Partidos Políticos; esta Junta General Ejecutiva emite el siguiente

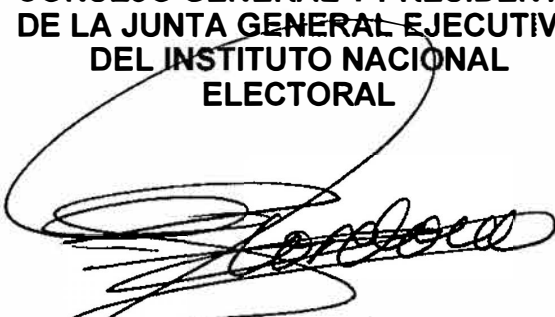
ACUERDO

PRIMERO. Se declara que Encuentro Social se ubica en el supuesto establecido en el artículo 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la Ley General de Partidos Políticos, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputaciones federales, senadurías o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO. En términos del Considerando 15 del presente Acuerdo, dese vista al partido político Encuentro Social con la presente declaratoria, a fin de garantizar su derecho de audiencia y que esté en condiciones de alegar lo que a su derecho convenga en un término de setenta y dos horas contado a partir de su legal notificación. Una vez transcurrido dicho término, elabórese el Proyecto de Resolución respecto de la pérdida de registro de Encuentro Social, para que, previa aprobación de este órgano colegiado, se someta a consideración del Consejo General del INE.

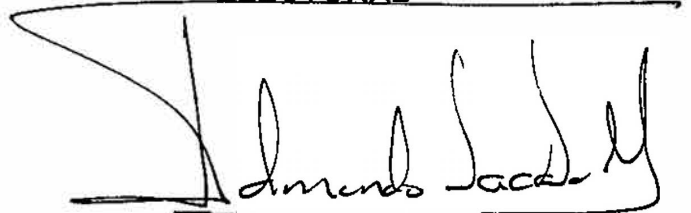
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva celebrada el 3 de septiembre de 2018, por votación unánime de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto, de los Directores de las Unidades Técnicas de Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez Picazo; de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello; no estando presente durante el desarrollo de la sesión el Director Ejecutivo de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL Y PRESIDENTE
DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL**



**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**EL SECRETARIO EJECUTIVO Y
SECRETARIO DE LA JUNTA
GENERAL EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL**



**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo, también en este caso le ruego que realice las gestiones necesarias para la publicación del Dictamen aprobado en el Diario Oficial de la Federación. _____

Continúe por favor con el siguiente asunto del orden del día. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, es el relativo Informe Final de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales sobre el cumplimiento y avance de las actividades establecidas en el Plan Integral y los Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2017-2018. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Jaime Rivera. _____

El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero Presidente. _____

Este Informe Final del cumplimiento de los calendarios de coordinación de los Procesos Electorales Locales es una manifestación formal del cierre de este Proceso Electoral que, como sabemos, el Instituto Nacional Electoral como autoridad rectora del Sistema Nacional Electoral, debió por un lado, elaborar conjuntamente con los Organismos Públicos Locales y secuencialmente coordinar, supervisar, acompañar el cumplimiento de estas, de las atribuciones de los Organismos Públicos Locales en sus respectivos ámbitos de competencia. _____

En este reporte se informa sobre la totalidad de 3 mil 466 actividades programadas, todas se cumplieron, 88 por ciento en los plazos estrictos... _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Le ruego me disculpe. Y le ruego, por supuesto, si está de acuerdo, ¿me permita decretar un receso de 2 minutos para poder continuar con su intervención y poder dispensarle la atención que se merece? _____

El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Por supuesto. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias.____

Me permito decretar, consecuentemente, un receso de 2 minutos para esta sesión.____

(Se decreta receso a las 17:00 horas)_____

(Receso)_____

(Se reanuda la sesión las 17:16 horas)_____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Integrantes del Consejo General les ruego tomar sus lugares para reiniciar la sesión, está en uso de la palabra el Consejero Electoral Jaime Rivera, por favor. _____

El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero Presidente. _____

Estaba haciendo alusión a un Informe que todos tienen en sus documentos en esta mesa, sobre la conclusión de los calendarios de coordinación entre el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, para conducir los Procesos Electorales en 30 entidades federativas. _____

Estos calendarios se alinearon con el Calendario General homologado y aprobado por este Consejo General. _____

Conforme a la función rectora del Instituto y a la buena disposición de los Organismos Públicos Locales, se pudo llevar a buen término estas elecciones, podemos decir que el Sistema Nacional Electoral se ha aprobado una vez más y que la coordinación y la colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales, ha demostrado que es una garantía para llevar a cabo y consumir elecciones apegadas a la legalidad, transparentes y confiables. _____

Confiamos por lo tanto, en que las próximas elecciones del año siguiente, sigan un curso semejante de coordinación, y por lo tanto, puedan ser un éxito estos Procesos Electorales del año próximo. _____

Es todo Consejero Presidente, gracias. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral Jaime Rivera. _____

Si no hay más intervenciones. _____

Damos por recibido, este Informe Final, y le pido al Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente asunto del orden del día. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente asunto es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la modificación del Acuerdo INE/CG652/2018, en acatamiento a las sentencias emitidas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y SUP-JDC-421/2018, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Jaime Rivera. _____

El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero Presidente. _____

Este proyecto de Acuerdo que se pone a consideración del Consejo General, responde al acatamiento a las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con las referencias ya mencionadas por el Secretario Ejecutivo. _____

En pocas palabras el Tribunal Electoral determinó en una de esas sentencias prescindir de la prueba de rasgos de carácter, en el proceso de selección de las o de los Consejeros Electorales Locales. _____

Aun cuando esta sentencia se refirió, respondió a una impugnación para la Convocatoria de Durango, el pasado 23 de agosto este Consejo General decidió impactar la sentencia en todas las convocatorias para hacerlas homogéneas y que todos los aspirantes compitan en las mismas condiciones. _____

Hay que decir que en esa sesión del 23 de agosto pasado, el Consejo General, cumplió en lo que se refería a los Lineamientos para el ensayo presencial, y para los Lineamientos para las entrevistas previas a la designación, lo que cualquier referencia

a esta prueba de rasgos de carácter, y por lo tanto, se empezó a cumplir con la cancelación de esa etapa de la evaluación y para la designación de Consejeros Electorales._____

Sin embargo, por un principio de certeza, deberán modificarse también las convocatorias respectivas, a fin de que para todos los aspirantes quede muy claro el conjunto de reglas que deben normar este proceso de selección de Consejeras y Consejeros Electorales para los Organismos Públicos Locales de 13 entidades federativas._____

Con este Proyecto de Acuerdo, entonces, se formaliza esa determinación, y todos los aspirantes pueden tener la certeza._____

Por otro lado, esta misma sentencia del Tribunal Electoral que retira como un requisito, o si era inválido, el requisito establecido en leyes secundarias que impide participar en este tipo de procesos a quienes hayan obtenido una segunda nacionalidad._____

Venturosamente el Tribunal Electoral, como en su momento también este propio Instituto, ha considerado que este tipo de restricciones no es saludable para las sociedades democráticas de nuestro tiempo, y que deben removerse por un principio de maximización de derechos._____

Ese punto también, queda excluido en las convocatorias._____

Y para darle congruencia y certeza normativa a los futuros procesos de selección de Consejeros, Consejeras de los Organismos Públicos Locales, quiero solicitar que se agregue un Punto Resolutivo en este Acuerdo, por el cual se instruya a la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales que, una vez concluido el proceso de designación que está en curso, se discuta en esta Comisión, y en su caso, se apruebe, después se presente a este Consejo, un Proyecto de Acuerdo para modificar el Reglamento de Designación y Remoción de Consejeros y Consejeras de los Organismos Públicos Locales, para suprimir ese requisito de no haber adquirido una segunda nacionalidad._____

Adicionalmente solo quisiera sugerir que en el Punto Segundo del Acuerdo, en el que se habla de darle amplia difusión a estas modificaciones, a la Convocatoria, o estas convocatorias modificadas, se agregue que, simplemente, para una mayor publicidad, que este Acuerdo, así como se refiere que será, se difundirán las convocatorias en la página del Instituto Nacional Electoral, se agregue ahí que este mismo Acuerdo, por lo que corresponde a los 2 aspectos y las convocatorias correspondientes, deberán ser publicadas en el portal informático del Instituto Nacional Electoral._____

Es todo, Consejero Presidente._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: De acuerdo, Consejero Electoral Jaime Rivera, gracias._____

Si no hay intervenciones adicionales, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación respectiva._____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en el orden del día como el punto 14, tomando en consideración las propuestas del Consejero Electoral Jaime Rivera._____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo._____

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello; no estando presentes durante la votación los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez y Doctor Benito Nacif Hernández), Consejero Presidente._____

Y tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones procederé a realizar el engrose de conformidad con los argumentos expuestos._____

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG1303/2018) Ptos. 14_____

INE/CG1303/2018

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO INE/CG652/2018, EN ACATAMIENTO A LAS SENTENCIAS EMITIDAS EN LOS EXPEDIENTES SUP-RAP-216/2018 Y SUP-JDC-421/2018, DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

G L O S A R I O

Comisión:	Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral.
Consejo General:	Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Convocatorias:	Convocatorias para la selección y designación de las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales de los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.
CPEUM:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Instituto:	Instituto Nacional Electoral.
LGIPE:	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
OPL:	Organismo(s) Público(s) Local(es).
Reglamento Interior:	Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.
Reglamento:	Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la Designación y Remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.
Tribunal:	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Unidad Técnica:	Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral.

ANTECEDENTES

- I. El 28 de mayo de 2018, el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG505/2018, por el cual se aprobó como fecha límite el 1 noviembre de 2018 para designar a las y los Consejeros Electorales de los OPL de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, que concluyen su periodo de designación.
- II. El 18 de julio de 2018, el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG652/2018, por el que se aprueban las Convocatorias.
- III. El 23 de agosto de 2018, la Sala Superior del Tribunal emitió la sentencia relacionada con el Juicios de Protección SUP-JDC-421/2018, mediante la que determinó la inaplicación al caso concreto, del inciso a), párrafo 2 del artículo 100 de la LGIPE, consistente en el requisito para ser Consejera o Consejero Electoral, relativo a la porción “que no haya adquirido otra nacionalidad”.
- IV. El 23 de agosto de 2018, la Sala Superior del Tribunal emitió la sentencia relacionada con el Recurso de Apelación SUP-RAP-216/2018, mediante la que determinó modificar la Convocatoria para la selección y designación al cargo de Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango, a efecto de que el Instituto prescinda de la aplicación de la prueba de rasgos de carácter, toda vez que no satisface el subprincipio de idoneidad, resultando desproporcional y, por ende, inconstitucional.

CONSIDERACIONES

A. Competencia de la Comisión

1. El artículo 42, párrafo 5, de la LGIPE dispone que el Consejo General integrará la Comisión, que funcionará permanentemente y se conforma por cuatro

Consejeras y Consejeros Electorales designados por mayoría de cuando menos ocho votos del Consejo General, por un periodo de tres años y la presidencia será rotatoria en forma anual entre sus integrantes.

2. Los artículos 60, párrafo 1, inciso e) de la LGIPE y 73, párrafo 1, inciso i), del Reglamento Interior establecen que la Unidad Técnica estará adscrita a la Secretaría Ejecutiva, y tendrá, entre otras atribuciones, la de coadyuvar con la Comisión en la integración de la propuesta para conformar los Consejos de los OPL.
3. Los artículos 101, párrafo 1, inciso b), de la LGIPE, y 6, párrafo 2, fracción I, inciso a), del Reglamento, señalan que la Comisión tendrá a su cargo el desarrollo, vigilancia y la conducción del proceso de designación.
4. El artículo 8 del Reglamento señala que el proceso de selección y designación inicia con la publicación del Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba la convocatoria pública.

Asimismo, establece que las convocatorias serán propuestas por la Comisión al Consejo General, debiendo contener como mínimo:

- a) Bases;
- b) Cargos y periodos de designación;
- c) **Requisitos que deben cumplir las y los ciudadanos interesados;**
- d) Órganos del Instituto ante quienes se deberán registrar las y los interesados;
- e) Documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales;
- f) **Etapas y plazos del proceso de selección y designación;**
- g) Mecanismos de selección para cada etapa que permita evaluar los conocimientos, habilidades y competencias de las y los aspirantes;
- h) Formalidades para la difusión del proceso de selección, así como para la notificación a las y los aspirantes;
- i) Forma en que se realizará la notificación de la designación;
- j) Los términos en que rendirán protesta las y los aspirantes que resulten designados, y

k) La atención de los asuntos no previstos.

5. En ese contexto, dado que la determinación del Tribunal impactó en las convocatorias que se sometieron a consideración del Consejo General para su aprobación, este órgano colegiado cuenta con la competencia para proponer los ajustes necesarios a fin dar cumplimiento a lo mandado en las sentencias emitidas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y SUP-JDC-421/2018.

B. Fundamento legal

6. El artículo 116, Base IV, inciso c) de la CPEUM establece que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales de los OPL serán designados por el Consejo General del Instituto, en los términos previstos por la LGIPE. Las y los Consejeros Electorales estatales deberán ser originarios de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, y cumplir con los requisitos y el perfil que acredite su idoneidad para el cargo que establezca la ley. En caso de que ocurra una vacante de consejera o consejero electoral, el Consejo General hará la designación correspondiente en términos del referido artículo constitucional y la LGIPE.
7. El artículo 32, párrafo 2, inciso b) de la LGIPE señala que el Instituto tendrá como atribución, entre otras, la elección y remoción de la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales de los OPL.
8. El artículo 35, párrafo 1 de la LGIPE establece que el Consejo General es el órgano superior de dirección responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.
9. El artículo 44, párrafo 1, incisos g) y jj) de la LGIPE señalan que es atribución del Consejo General designar y remover, en su caso, a las y los Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los OPL, conforme a los procedimientos establecidos en la propia Ley, así como dictar los acuerdos necesarios para

hacer efectivas sus atribuciones, las demás señaladas en dicha Ley o en otra legislación aplicable.

10. El artículo 100, párrafo 1 de la LGIPE contempla que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales de los OPL serán designados por el Consejo General, por un periodo de siete años, conforme al procedimiento previsto por dicha Ley.
11. En el artículo Transitorio Décimo de la LGIPE se dispuso que el Consejo General debería realizar los nombramientos de las y los Consejeros Electorales de los OPL de forma escalonada, en los siguientes términos:
 - a) Tres consejeras o consejeros que durarán en su encargo tres años;
 - b) Tres consejeras o consejeros que durarán en su encargo seis años, y
 - c) Una o un consejero que durará en su encargo siete años.
12. El artículo 100, párrafo 2, de la LGIPE establece los requisitos para ser Consejera o Consejero Electoral del órgano superior de dirección de un OPL.
13. El párrafo 1, inciso a), del artículo 101 de la LGIPE dispone que el Consejo General emitirá una convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda, en la que deberán considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes se deberán inscribir las y los interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir.
14. El artículo 6, párrafo 1, fracción I, incisos a) al d), del Reglamento mandata que el Consejo General tiene la atribución de aprobar las convocatorias para establecer los procedimientos de selección y designación para ocupar los cargos de Consejera o Consejero Presidente y Consejera o Consejero Electoral del órgano superior de dirección de los OPL.

C. Modificación del Acuerdo INE/CG652/2018 y de las Convocatorias.

Derivado de la aprobación del Acuerdo INE/CG652/2018, dio inicio el proceso de selección y designación a efecto de cubrir, en 11 entidades, 3 vacantes y, en 2 entidades, únicamente 2 vacantes, asimismo, en el referido proceso las y los Consejeros Electorales de los OPL de las 13 entidades indicadas serán designados por un periodo de 7 años de conformidad con lo establecido en el artículo 100, párrafo 1, de la LGIPE.

En la etapa de registro de las y los aspirantes se recibieron un total de 1673 solicitudes de inscripción, cuyos expedientes fueron revisados para determinar el cumplimiento de los requisitos de ley, y de conformidad con la normatividad aplicable, fueron citados a presentar el examen de conocimientos respectivo, el 1º de septiembre de 2018. Posteriormente, las 12 aspirantes mujeres y los 12 aspirantes hombres que obtengan las mejores calificaciones, serán convocados para la elaboración del ensayo presencial con el objeto de evaluar su capacidad analítica. Los resultados de ambas evaluaciones se comunicarán y publicarán de conformidad con el Reglamento. Finalmente, una vez que concluyan las revisiones a que haya lugar, se convocará a la celebración de entrevistas de las y los aspirantes que hayan logrado llegar a esta etapa del proceso de selección y designación.

Ahora, en la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal dentro del SUP-RAP-216/2018, en el estudio de fondo, visible en las páginas 31 y 32, se argumentó:

“Consecuentemente, al no satisfacer el referido elemento del subprincipio de idoneidad, procede concluir que la restricción analizada resulta desproporcional y, por ende, inconstitucional.

Aún más, se estima que la base normativa impugnada, en virtud de que la forma en que está configurada transgrede el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los participantes.

En el tenor apuntado, aun cuando es verdad que la autoridad responsable afirmó que el resultado de la prueba de personalidad no tiene efectos cuantitativos, por carecer de valor o puntaje, lo cierto es que, como se demostró, realmente se trata de un examen con una indefinición normativa que trasciende a la esfera jurídica de los participantes, porque ante la falta de definiciones normativas que den certeza absoluta a los ciudadanos respecto a los aspectos subjetivos que se pretenden medir o evaluar con esa prueba, la metodología a emplear para su instrumentación, el órgano o institución académica encargada de su elaboración, así como de los términos para su aplicación y valoración, es válido concluir que su implementación y aplicación implica una intervención innecesaria y desproporcional en el libre desarrollo de la personalidad de los participantes, máxime que su valoración se deja a la entera discrecionalidad y reserva de la propia autoridad electoral nacional.”

En ese sentido, se determinó que el Instituto al llevar a cabo el proceso de selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango, debe prescindir de la aplicación de la prueba de rasgos de carácter, toda vez que no satisface el subprincipio de idoneidad, por lo que resulta desproporcional y, por ende, inconstitucional.

En cuanto a la sentencia emitida dentro del SUP-JDC-421/2018, la Sala Superior del Tribunal, en el estudio de fondo, visible en la página 39, sostuvo:

“En consecuencia, si bien la restricción prevista en el artículo 100, párrafo 2, inciso a) de la Ley Electoral, y su correlativo en la base tercera, numeral 1, de la convocatoria controvertida, está confeccionada como un medio idóneo para alcanzar un fin adecuado, al haber medidas alternas que logren lo buscado por el legislador con un menor impacto en el derecho fundamental de los justiciables es que no supera el subtest de necesidad y por consiguiente debe determinarse la inaplicación de la disposición en que se sustenta tal limitante”

Derivado de lo anterior, mandató a esta autoridad que inaplique dicha porción normativa en la parte que señala “que no haya adquirido otra nacionalidad”, por resultar una restricción no razonable, lo anterior, toda vez que no satisface el subprincipio de necesidad, pues la mera existencia de una doble nacionalidad

de un ciudadano nacido mexicano, no lo limita a ejercer el cargo de Consejera o Consejero Electoral y regir su actuar con base en los principios de objetividad, imparcialidad e independencia, aunado a que existen distintos medios de control constitucional y legal que garantizan la correcta actuación de las y los Consejeros Electorales.

Ahora bien, no pasa inadvertido para este Instituto que las determinaciones del órgano jurisdiccional se refieren a casos concretos, es decir, en el caso de la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-216/2018, sus efectos modifican, exclusivamente, el proceso de selección y designación de las y los Consejeros Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango, mientras que en el caso de la sentencia dictada dentro del expediente SUP-JDC-421/2018, sus efectos inaplican la porción normativa relativa a que “no haya adquirido otra nacionalidad”, dentro del proceso de selección y designación para el OPL de Aguascalientes. Sin embargo, lo cierto es que las modificaciones mandatadas tienen por objeto ampliar la esfera de derechos de las y los aspirantes; por lo tanto, considerando que actualmente, se está llevando a cabo el proceso de selección y designación de Consejeras y Consejeros Electorales en trece entidades federativas, resulta necesario garantizar que la totalidad de las y los aspirantes y no únicamente los correspondientes a Aguascalientes y Durango, tengan la certeza de un marco normativo homogéneo y en igualdad de condiciones.

A este respecto, es importante tener en cuenta los criterios que ha dictado la Sala Superior del Tribunal. Al respecto, en la sentencia dictada dentro del SUP-JDC-1163/2017 el máximo órgano electoral jurisdiccional determinó que cuando una resolución judicial analiza un contexto específico, en donde concurren diferentes personas que se encuentran en la misma circunstancia fáctica y en una situación jurídica común, generada por la aplicación de un determinado conjunto de normas y principios jurídicos, la restricción de los efectos de la decisión implicaría una vulneración al principio de igualdad, por lo que sus efectos deben ser aplicados a las personas que comparten tal circunstancia y situación, sin que ello implique darle efectos generales a una declaración de inconstitucionalidad de un precepto normativo.

De igual forma, en la resolución pronunciada dentro del SUP-JDC-1191/2016, la Sala Superior del Tribunal determinó que las sentencias o resoluciones judiciales pueden diferenciarse en función de las personas sobre las cuales trascienden sus efectos, esto es: sentencias entre partes (*inter partes*) y sentencias con efectos generales (*erga omnes*). Tal circunstancia se vincula con la relatividad o generalidad de los efectos de una resolución. Asimismo, cuando se declara la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad de una norma se reconocen efectos diferenciados en función de la propia determinación judicial atendiendo al grado de vinculación respecto de las partes en el proceso y de quienes no lo han sido; siendo que, por un lado, el *efecto de cosa juzgada* opera directamente respecto a las partes del procedimiento (así como respecto de la materia de la impugnación) y, por otro, respecto de quienes no fueron parte en el procedimiento, se reconoce un *efecto de cosa interpretada*.

Lo anterior, no significa necesariamente que en todos los casos se proyectarán sus efectos con un alcance *erga omnes*, puesto que atendiendo al contexto mencionado es posible que se limiten a aquellas personas que no habiendo sido parte formal en un procedimiento se encuentran en la **misma situación jurídica y circunstancia fáctica**, respecto de la cual la inaplicación por inconstitucionalidad o inconvencionalidad de una norma les trae aparejado un beneficio en sus derechos.

Aunado a los antecedentes referidos, también resulta aplicable al caso concreto correspondiente la Tesis LVI/2016, emitida por la Sala Superior del Tribunal dentro del SUP-JDC-1191/2016, misma que hace referencia a los requisitos para que una resolución de inconstitucionalidad o inconvencionalidad, produzca efectos para quienes no intervinieron en el proceso, entre los que se encuentran: a) que se trate de personas en la misma situación jurídica, b) que exista identidad de los derechos fundamentales vulnerados o que puedan verse afectados, c) que exista una circunstancia fáctica similar respecto del hecho generador y, d) que exista identidad en la pretensión de quien obtuvo, mediante un fallo judicial:

“DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD O INCONVENCIONALIDAD DE NORMAS ELECTORALES. REQUISITOS PARA QUE PRODUZCA EFECTOS PARA QUIENES NO INTERVINIERON EN EL PROCESO.- De la interpretación sistemática y funcional del artículo 1º, 17, 99, párrafo octavo, y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en correlación a lo dispuesto en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;

así como 25, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se concluye que los efectos de la declaración de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de una norma en materia electoral no necesariamente se limitan a las partes que intervinieron en el proceso judicial respectivo, pues si bien, en términos generales, las determinaciones por las que se declare dicha inconstitucionalidad o inconvencionalidad se diferencian en función de las personas sobre las cuales trascienden sus efectos, atendiendo al grado de vinculación respecto de las partes en el proceso, esto es, entre partes (inter partes), o bien con efectos generales (erga omnes), existen determinados casos en los que dichos efectos pueden trascender a la esfera de derechos de una persona o grupo de personas que, no habiendo sido parte formal en ese procedimiento, se encuentren en una misma situación jurídica y fáctica respecto del hecho generador de la vulneración alegada, a fin de garantizar los principios de igualdad de oportunidades y de certeza en el Proceso Electoral. Para ello, deberán de cumplirse los siguientes requisitos: i) que se trate de **personas en la misma situación jurídica**; ii) que exista **identidad de los derechos fundamentales** vulnerados o que puedan verse afectados con motivo de la aplicación de una norma declarada contraria a la Constitución Federal o Tratados Internacionales; iii) que exista una **circunstancia fáctica similar** respecto del hecho generador de la vulneración alegada, y iv) que **exista identidad en la pretensión de quien obtuvo**, mediante un fallo judicial, la inaplicación de la norma electoral inconstitucional o inconvencional.”

Quinta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1191/2016.—Actor: Ricardo Jiménez Hernández.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de Puebla.—30 de marzo de 2016.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: Andrea J. Pérez García y Mauricio I. Del Toro Huerta.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintidós de junio de dos mil dieciséis, aprobó por unanimidad de votos, la tesis que antecede.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 77 y 78.

En este contexto, surge la necesidad de homologar el resto de las Convocatorias aprobadas, a efecto de llevar a cabo un proceso de selección y designación apegado al principio rector de imparcialidad en donde cada una de las y los aspirantes se encuentren en igualdad de circunstancias.

En razón de lo anterior, y en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal en las sentencias de los expedientes SUP-JDC-421/2018 y SUP-RAP-216/2018, resulta procedente:

- a) **Modificar** el Acuerdo INE/CG652/2018, por el que se aprobaron las Convocatorias, en los siguientes términos:
 - En la consideración “C”, con el rubro “Contenido de las Convocatorias”, inciso d) relativo a los “Requisitos y documentación a entregar”, se implicará la parte normativa relativa a “que no adquiera otra nacionalidad” prevista en el artículo 100, párrafo 2, inciso a), de la LGIPE.
 - En la misma consideración, en su inciso f) sobre las “Etapas del proceso de selección y designación”, se elimina la parte relativa a la aplicación de la prueba de rasgos de carácter.

En consecuencia, el listado de las etapas que deben contener las Convocatorias quedará como sigue:

- i. Convocatoria pública
- ii. Registro de aspirantes y cotejo documental:
- iii. Verificación de los requisitos legales,
- iv. Examen de conocimientos,
- v. Ensayo presencial,
- vi. Valoración curricular y entrevista.

- b) **Modificar** las Convocatorias, en los términos siguientes:

- En las Bases Tercera, numeral 1, y Cuarta, numeral 10, inciso a), se elimina la porción normativa “*que no haya adquirido otra nacionalidad*”.

- En la Base Séptima, se elimina el apartado correspondiente a la *prueba de rasgos de carácter*, y en consecuencia se recorre la numeración subsecuente.

Por los motivos y consideraciones expuestos, el Consejo General emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba la propuesta de modificación al Acuerdo INE/CG652/2018, así como de las Convocatorias en los términos de los Anexos que forman parte integrante del mismo, en acatamiento a las sentencias emitidas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y SUP-JDC-421/2018.

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad Técnica para que gestione de forma inmediata la difusión del presente Acuerdo, así como de las Convocatorias, en el portal de Internet del Instituto, en los estrados de las oficinas del Instituto de todo el país y en los canales con los que cuenta la Coordinación Nacional de Comunicación Social del Instituto.

TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica hacer del conocimiento a las y los Vocales integrantes de las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales de las entidades federativas en las que se realizará la designación de Consejeras y Consejeros Electorales, para que por su conducto se realicen las gestiones necesarias para que las Convocatorias se publiquen en los estrados de las Juntas Locales y Distritales, así como en los portales de Internet de los OPL de las entidades referidas.

CUARTO. Se ordena a la Unidad Técnica notifique a las y los aspirantes que accedieron a la etapa del examen de conocimientos en el proceso de selección y designación de las y los Consejeros Electorales en curso, el contenido del presente Acuerdo, mediante el correo electrónico registrado para tal efecto.

QUINTO. Se ordena a la Comisión para que, una vez concluido el proceso de selección y designación de las y los Consejeros de los OPL que se encuentra en curso, presente al Consejo General una propuesta de modificación al Reglamento para suprimir el precepto correspondiente a *la no adquisición de otra nacionalidad*.

SEXTO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero y 41, Base V, apartado C, último párrafo; 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo 1, inciso d); 4, párrafo 2; 6, párrafo 2; 29, párrafo 1; 30, párrafo 2; 31, párrafos 1 y 4; 32, párrafo 2, inciso b); 39, párrafo 2; 42, párrafos 5, 6, 8 y 10; 43; 44, párrafo 1, incisos a), g) y jj); 45, párrafo 1, inciso a); 46, párrafo 1, inciso k); 60 inciso e); 99, párrafo 1; 100 y 101, de la Ley General; 73, inciso i) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

CONVOCA:

A las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 100, párrafos 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante Ley General); y artículo 9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, y deseen participar en el proceso de selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, a solicitar su registro y presentar su documentación de aspirante conforme a las siguientes:

BASES:

PRIMERA. Aspectos generales

Las y los aspirantes interesados en participar en el proceso de selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, deberán llenar los formatos que para tal efecto se pondrán a disposición en el portal del Instituto www.ine.mx, desde el **23 de julio al 17 de agosto 2018**.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Una vez requisitados los formatos, deberán imprimirse, **verificar que la información capturada se encuentre completa al imprimir el formato** y firmarse. Los formatos tendrán como único propósito recabar la información de las y los aspirantes, por lo que en ningún caso se podrán considerar como una constancia de registro al proceso de selección y designación.

Tanto los formatos como la documentación solicitada en la presente Convocatoria se recibirán del **13 al 17 de agosto de 2018**, en las oficinas de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas o en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).

Quien así lo requiera podrá asistir a las oficinas antes mencionadas para ser auxiliados en el llenado de los formatos.

La recepción de solicitudes debidamente requisitadas se realizará ante los siguientes órganos del Instituto Nacional Electoral:

Secretaría Ejecutiva

Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio A, Planta Alta, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México, C.P. 14610.

Junta Local Ejecutiva

Avenida Aguascalientes No. 702 Sur, esquina Jardines de Guadalupe, Fraccionamiento Jardines de Las Fuentes, Aguascalientes, Aguascalientes, C. P. 20278.

Junta Distrital 01

Carretera Panamericana Norte No. 323 Km 14, Colonia Jesús Gómez Portugal (Margaritas), Jesús Maria, Aguascalientes, C. P. 20909.

Junta Distrital 02

Avenida Aguascalientes Oriente No. 3404, Fraccionamiento El Cedazo, Aguascalientes, Aguascalientes, C. P. 20263.

Junta Distrital 03

Avenida de la Convención de 1914 Pte. No. 1626, Fraccionamiento La Concordia, Aguascalientes, Aguascalientes, C. P. 20270.

Las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Mexicanos, artículo 100, párrafo 2 de la Ley General y en el artículo 9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, podrán inscribirse como aspirantes al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes.

De conformidad con el artículo 13, párrafo 4, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, las y los aspirantes que participen en el proceso de selección y designación en todo momento deberán mantener el cumplimiento de requisitos; de no ser así, la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante Comisión de Vinculación), descartará a la o el aspirante que se encuentre en este supuesto en cualquier etapa del proceso.

SEGUNDA. Cargo y periodo a designar.

El proceso de selección tiene como propósito designar a tres Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, que durarán en su encargo siete años, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 101, párrafo 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

TERCERA. Requisitos.

Las y los interesados en ocupar el cargo referido en la Base Segunda deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
2. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente;
3. Tener más de 30 años cumplidos al día de la designación;
4. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel licenciatura;
5. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
6. Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

7. No haber sido registrado como candidata o candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación;
8. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación;
9. No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;
10. No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación como de las entidades federativas, ni subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno. No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni Gobernadora o Gobernador, ni Secretaria o Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser Presidenta o Presidente Municipal, Síndico (a) o Regidor (a) o titular de dependencia de los Ayuntamientos; y
11. No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes o de cualquier otra entidad federativa.

CUARTA. Documentación a entregar.

Las y los interesados deberán presentar la siguiente documentación:

1. Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto;
2. Copia certificada del acta de nacimiento;
3. En caso de no ser originario de la entidad federativa correspondiente, deberá presentar una constancia que acredite una residencia efectiva en la entidad de por lo menos cinco años anteriores a la fecha de designación establecida en la Convocatoria; dicha constancia deberá ser expedida por autoridad competente. En su caso, el documento con el que compruebe ubicarse en una excepción por razón de ausencia del país por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
4. Original y copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, para su certificación;
5. Dos fotografías recientes tamaño infantil a color;
6. Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la solicitud con una antigüedad máxima de tres meses;

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

7. Copia certificada del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha de expedición mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la Convocatoria para la designación;
8. Currículum vitae firmado por la o el aspirante a través del formato que para tal efecto estará disponible en el portal del Instituto, el cual deberá contener, entre otros datos: nombre y apellidos completos, domicilio, teléfonos y correo electrónico, estudios realizados, trayectoria laboral, académica, política, docente y profesional, publicaciones, actividad empresarial, cargos de elección popular, organizaciones de cualquier tipo a las que pertenezca y el carácter de su participación, así como el empleo, cargo o comisión que, en su caso, desempeñe al momento del registro;
9. Resumen curricular con una extensión máxima de una cuartilla con letra Arial 12, para su eventual publicación, por lo que no deberá contener datos personales privados. Para lo anterior, deberá emplear el formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto; y
10. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa (empleando el formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto), en la que se manifieste:
 - a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
 - b) No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
 - c) No haber sido registrado como candidata o candidato a cargo alguno de elección popular durante los cuatro años anteriores a la designación;
 - d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación;
 - e) No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;
 - f) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno federal o de las entidades federativas, ni subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno;
 - g) No ser jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni gobernadora o gobernador, ni secretaria o secretario de gobierno o su equivalente a nivel local;

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

- h) No ser jefe o jefa delegacional, presidenta o presidente municipal, síndica o síndico o regidora o regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos;
- i) No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes o de cualquier otra entidad federativa;
- j) La aceptación de dar por concluido todo empleo, cargo o comisión en caso de ser designado como Consejera o Consejero Presidente;
- k) Toda la información que, con motivo del proceso de selección a que se refiere la Convocatoria, ha proporcionado o llegue a proporcionar es veraz y toda la documentación que ha entregado o llegue a entregar es auténtica;
- l) La aceptación de sujetarse a la Convocatoria y a las reglas establecidas en el presente proceso de selección; y
- m) Consentimiento para que sus datos personales sean utilizados únicamente para los fines de la convocatoria.

Los formatos para la presentación de los requisitos establecidos en los párrafos 1, 8, 9 y 10, estarán disponibles en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en las oficinas del Instituto Nacional Electoral.

Si fuera el caso de que las y los interesados, con motivo de alguna convocatoria anterior hubieran presentado al Instituto Nacional Electoral copia certificada del acta de nacimiento; del título o cédula profesional de nivel licenciatura y los mismos obraran en los archivos del Instituto, deberán hacerlo del conocimiento en su solicitud de registro de la presente Convocatoria, los cuales se ubicarán en una situación de excepción para exhibirlos, una vez que la autoridad nacional electoral verifique su resguardo documental.

De ser el caso que la solicitud de la o el aspirante se realice el día 17 de agosto de 2018, la Unidad Técnica contará con el término de veinticuatro horas para verificar en sus archivos la existencia de dichos documentos, y en caso de que no cuente con ellos, requerirá a la o el aspirante para que dentro del término de cuarenta y ocho horas los remita digitalizados a través de correo electrónico y de igual forma en forma física, a través de la Junta Local o Distrital de su entidad federativa.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

QUINTA. Plazos y horarios para el registro

Las y los aspirantes deberán presentar los formatos referidos en las Bases Primera y Cuarta para solicitar su registro del **13 al 17 de agosto de 2018**, en la Secretaría Ejecutiva, en la Junta Local Ejecutiva o en las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral correspondientes al estado de Aguascalientes, en los domicilios citados en la Base Primera de la presente Convocatoria, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).

SEXTA. Notificaciones.

Todas las notificaciones se harán mediante el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, salvo aquéllas que deban realizarse de manera personal a las y los aspirantes, mismas que se harán mediante el correo electrónico que hayan registrado y que deberán ser acusadas de recibido por los aspirantes de forma inmediata a su recepción, en el entendido de que quienes no lo hagan dentro de las veinticuatro horas posteriores a su envío, se darán por debidamente notificados.

Las ciudadanas o ciudadanos designados por el Consejo General serán notificados en los términos del artículo 24, párrafo 7, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

SÉPTIMA. Etapas del proceso de selección y designación.

El proceso de selección de las Consejeras o Consejeros Electorales del órgano superior de dirección del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes se desarrollará de conformidad con las siguientes etapas:

1. Registro de aspirantes. Las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en el estado de Aguascalientes, así como la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral recibirán, en las fechas establecidas en la Base Quinta de la presente Convocatoria, las solicitudes y la documentación que presenten las y los aspirantes o por persona autorizada por escrito, siempre y cuando en la solicitud aparezca la firma autógrafa de dichos aspirantes para ocupar el cargo convocado. Cada órgano receptor será el responsable de concentrar las solicitudes y documentación correspondiente para la integración de los expedientes.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

En las sedes de las Juntas Local y Distritales del estado de Aguascalientes, así como de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, se proporcionará el apoyo necesario para llevar a cabo el registro en el sistema habilitado para la presente Convocatoria.

Al momento de presentar la solicitud de registro y entregar la documentación correspondiente, las y los aspirantes recibirán un acuse con un folio asignado y la descripción de la información y documentación entregada al Instituto, el cual deberán firmar de conformidad. El mencionado comprobante tendrá como único propósito acusar de recibida la documentación ahí referida, por lo que en ningún caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos de esta Convocatoria.

La Junta Local Ejecutiva será la responsable de concentrar los expedientes de las y los aspirantes que se presenten ante la misma y ante las Juntas Distritales Ejecutivas, elaborando una lista de aquéllos que presentaron su solicitud, señalando las inconsistencias u omisiones en los documentos presentados, las cuales serán puestas a consideración de la Comisión de Vinculación.

A más tardar el **20 de agosto de 2018**, la Junta Local Ejecutiva remitirá los expedientes a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante Unidad de Vinculación) para que ésta los entregue tanto en físico como en versión electrónica al Presidente de la Comisión de Vinculación. Al resto de las y los Consejeros del Consejo General se les entregará una copia en medio electrónico.

Los expedientes originales estarán bajo resguardo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación, quien los pondrá a disposición para consulta de las y los integrantes del Consejo General y de la propia Comisión.

La Secretaría Ejecutiva y las Juntas Local y Distritales no podrán descartar o rechazar solicitud alguna que se les presente. En caso de que algún aspirante no entregue la totalidad de la documentación, podrá subsanar la omisión siempre y cuando se encuentre dentro del periodo de registro establecido en la presente Convocatoria o a solicitud expresa de la Unidad de Vinculación.

2. Verificación de los requisitos legales. La Comisión de Vinculación, con el apoyo de los grupos de trabajo que en su caso se conformen, verificará el cumplimiento de los requisitos legales, y aprobará, a más tardar el **28 de agosto de 2018**, el Acuerdo que contenga la relación con los nombres y apellidos de las y los

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

aspirantes que cumplen con todos los requisitos y ordenará su publicación, agregando el resumen curricular de cada uno de los aspirantes.

En el mismo Acuerdo, la Comisión de Vinculación aprobará la sede y horario en que se aplicará el examen de conocimientos.

La Unidad de Vinculación publicará la guía de estudio y las condiciones del examen de conocimientos, en la misma fecha en la que se habiliten los formatos de registro de aspirantes en la página del Instituto; es decir, el **23 de julio**.

La información prevista en los párrafos anteriores deberá ser publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas en el estado de Aguascalientes.

3. Examen de conocimientos. Las y los aspirantes que hayan cumplido con todos los requisitos legales serán convocados a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, para presentar el examen de conocimientos, mismo que tendrá verificativo el día **1 de septiembre de 2018**, en la sede previamente definida y publicada en el portal del Instituto por la Unidad de Vinculación. La fecha para la presentación del examen será inamovible, por lo que no podrá aplicarse en otra diversa, por ninguna causa.

El examen comprenderá dos apartados: el primero, de competencias básicas, que comprende las áreas comunicativa y matemática, el cual tendrá una ponderación en la calificación de 40%. El segundo será de conocimientos técnicos, y comprenderá las áreas teórico-normativa y de procedimientos electorales, el cual tendrá una ponderación en la calificación de 60%.

La estructura y el contenido del examen de conocimientos serán debidamente establecidos en la guía de estudios que se publicará en la página del Instituto.

Las y los aspirantes deberán identificarse con credencial para votar o identificación oficial con fotografía vigente. La aplicación y evaluación del examen de conocimientos estará a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).

La Comisión de Vinculación solicitará al Ceneval que la entrega de los resultados se realice con listas diferenciadas de mujeres y hombres, en orden de mayor a menor calificación. De tal manera que pasarán a la siguiente etapa 12 aspirantes mujeres y 12 aspirantes hombres que obtengan la mejor calificación, siempre y

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

cuando ésta sea igual o mayor a seis. En caso de empate en la posición número 12, accederán las y los aspirantes que se encuentren en este supuesto.

Los resultados del examen de conocimientos se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día **13 de septiembre de 2018**, ordenados de mayor a menor calificación y diferenciando las listas de la forma siguiente:

- a) Nombre de las aspirantes que acceden a la siguiente etapa;
- b) Nombre de los aspirantes que acceden a la siguiente etapa; y
- c) Folios de las y los aspirantes que no pasan a la siguiente etapa.

A partir de dicha publicación, las y los aspirantes que no hubiesen accedido a la siguiente etapa, tendrán hasta el día **17 de septiembre de 2018** para en su caso, solicitar por escrito al correo electrónico revisiones.utvopl@ine.mx o ante la Unidad de Vinculación, la revisión del examen, misma que tendrá verificativo a partir del día **18 de septiembre de 2018**. La Unidad de Vinculación notificará a las y los solicitantes a través del correo electrónico que hayan proporcionado, la fecha, hora y lugar para la realización de la sesión de revisión. En todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la Ciudad de México.

Para la revisión del examen, se llevará a cabo una sesión por cada solicitante y a la misma acudirán personalmente la o el aspirante, un representante de Ceneval, y un representante de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación o la o el funcionario que ésta designe, quien levantará un acta de revisión de examen que deberá ser firmada por quienes intervengan en dicho acto. Para el desahogo de dicha sesión, la Institución evaluadora del examen proporcionará a la Secretaría Técnica todos los elementos necesarios para salvaguardar el derecho de audiencia y debido proceso del solicitante.

Si los resultados de la revisión realizada determinan que la o el sustentante obtuvo una calificación igual o superior a la posición 12, la Comisión de Vinculación ordenará su inclusión en la siguiente etapa, sin perjuicio de las y los aspirantes ya incluidos en las listas publicadas.

Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

4. Ensayo presencial. Las y los aspirantes que acrediten la etapa del examen de conocimientos, presentarán un ensayo de manera presencial, el **22 de septiembre de 2018**.

El Consejo General aprobará los lineamientos que establezcan lo siguiente:

- a) La institución de educación superior, de investigación o evaluación responsable de la aplicación y calificación de los ensayos presenciales;
- b) Criterios para la elaboración y dictamen de los ensayos presenciales;
- c) Requisitos formales para la aplicación del ensayo; y
- d) Fecha de entrega de resultados por parte de la institución educativa designada.

Los lineamientos aprobados serán notificados a las y los aspirantes, así como las sedes y horarios de aplicación, a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. La fecha para la elaboración del ensayo será inamovible, por lo que no podrá presentarse en otra fecha, bajo ningún motivo.

A través de la elaboración y presentación del ensayo, las y los aspirantes serán evaluados sobre la habilidad que posean para definir, situar y delimitar un problema del ámbito electoral, a partir de la delimitación y contextualización de un problema central, de la identificación de los actores relevantes y los escenarios posibles, analizar los riesgos y oportunidades, para desarrollar propuesta operativas a efecto de gestionar o resolver los problemas identificados; no así sobre su postura u opinión particular con respecto al tema desarrollado. De esta manera, el ensayo permitirá calificar la capacidad de análisis, el desarrollo argumentativo, el planteamiento del problema y el desarrollo de escenarios y posibles soluciones, con el objeto de establecer una estrategia y una ruta crítica de acción con base en las atribuciones y competencias legales de los Organismos Públicos Locales.

La aplicación de los ensayos y su dictamen estará a cargo de la institución designada, que determinará quiénes son las y los aspirantes cuyo ensayo sea dictaminado como idóneo. Los ensayos serán evaluados por tres académicos que determine la propia institución y será idóneo el ensayo de la o el aspirante que obtenga al menos dos dictámenes favorables.

La institución designada entregará los tres dictámenes de cada uno de las y los aspirantes a la Comisión de Vinculación, a través de la Unidad de Vinculación a más tardar el día **11 de octubre de 2018**.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Los resultados del ensayo se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día **11 de octubre de 2018**, en listas diferenciadas, de acuerdo con lo siguiente:

- a) Nombre de las aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
- b) Nombre de los aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
- c) Folios de las y los aspirantes con dictamen de ensayo no idóneo.

Una vez que se tenga la lista de las y los aspirantes que hayan resultado con dictamen idóneo en el ensayo, la Comisión de Vinculación la hará de conocimiento público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y la notificará a las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, quienes podrán presentar por escrito, dentro de los cinco días hábiles siguientes, ante la misma Comisión, las observaciones y comentarios que consideren convenientes respecto de cada una de las y los aspirantes; el escrito deberá acompañarse de los elementos objetivos que sustenten o corroboren sus afirmaciones.

A partir de dicha publicación, aquellos aspirantes cuyo ensayo haya sido dictaminado como no idóneo, tendrán derecho a solicitar por escrito, hasta el día **15 de octubre de 2018**, su revisión ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Aguascalientes o directamente ante la Unidad de Vinculación. La diligencia de revisión de ensayo deberá efectuarse a partir del día **16 de octubre de 2018**. En todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la Ciudad de México.

Si los resultados de la revisión realizada arrojan que el ensayo de la o el aspirante obtuvo un dictamen idóneo, la Comisión de Vinculación lo hará del conocimiento de las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para que en un término de dos días hábiles emitan las observaciones a que haya lugar en los términos precitados.

Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

Concluido el plazo de observaciones de las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, la Comisión de Vinculación hará del conocimiento público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, la relación de quienes, al no tener algún impedimento legal y habiendo aprobado las etapas anteriores, pasarán a la etapa

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

de valoración curricular y entrevista, conforme al calendario que apruebe la Comisión de Vinculación para tal efecto.

5. Valoración curricular y entrevista. Para los efectos de esta Convocatoria, la valoración curricular y la entrevista serán consideradas una misma etapa.

Las y los aspirantes cuyo ensayo resulte idóneo y se considere que no existen elementos objetivos aportados por las y los representantes de los partidos políticos o por Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para descalificarlos como aspirantes, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista.

El Consejo General, a propuesta de la Comisión de Vinculación, aprobará los criterios para realizar la valoración curricular y la entrevista, los que deberán considerar al menos lo siguiente:

- a) Propósito;
- b) Responsables de conducir las entrevistas;
- c) Procedimiento para la calificación;
- d) Las competencias a valorar;
- e) Ponderación que se utilizará para la calificación;
- f) Instrumento que se utilizará para la calificación.

Los criterios que apruebe el Consejo General serán notificados a las y los aspirantes a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx

Esta etapa estará a cargo de las y los Consejeros Electorales del Instituto, los cuales conformarán grupos de entrevistadores.

Al efecto, se procurará un equilibrio entre géneros en la conformación de las listas de las y los aspirantes que accedan a dicha etapa, para lo cual, la Comisión de Vinculación integrará las listas diferenciadas de hombres y mujeres cuyo ensayo presencial haya sido dictaminado como idóneo.

Las entrevistas se realizarán conforme al calendario y sedes que previamente apruebe la Comisión de Vinculación. La información sobre el calendario y la sede se publicará en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. Asimismo, se notificará a las y los aspirantes al correo electrónico proporcionado por los mismos, debiendo acusar de recibida dicha actuación. De la misma forma, se publicará en los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en el estado de Aguascalientes.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Las entrevistas serán transmitidas en tiempo real en el portal del Instituto www.ine.mx, serán grabadas en video y estarán disponibles en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral.

En la etapa de valoración curricular y entrevista se identificará que el perfil de las y los aspirantes se apegue a los principios rectores de la función electoral y cuente con las competencias indispensables para determinar la idoneidad de las y los aspirantes para el desempeño del cargo.

La entrevista será presencial, se realizará en panel con al menos tres Consejeros o Consejeras Electorales, y deberá atender al proceso siguiente:

- a) **Antes de la entrevista.** Las y los aspirantes deberán presentarse por lo menos 30 minutos previos a la hora de inicio de la entrevista.
- b) **Durante la entrevista.** Se conforma de tres etapas: apertura, desarrollo y cierre; tendrá una duración de hasta 20 minutos.
- c) **Después de la entrevista.** Al finalizar el proceso de entrevista, cada Consejera o Consejero Electoral deberá asentar el valor cuantificable de cada uno de los rubros que conforman la cédula de valoración curricular y entrevista.

Excepcionalmente, previa causa justificada, las entrevistas podrán llevarse a cabo de manera virtual mediante el uso de tecnologías de la información.

Las y los Consejeros Electorales del Consejo General podrán utilizar cualquier documento, insumo o herramienta que coadyuve a la realización de la entrevista.

En atención al principio de máxima publicidad, las cédulas de los aspirantes se harán públicas en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

OCTAVA. Integración de las listas de candidatas y candidatos

Conforme a lo previsto en los artículos 100, párrafos 1 y 3 y 101, párrafos 1, inciso f), 3 y 4 de la Ley General y 24, párrafo 1, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, la Comisión de Vinculación presentará al Consejo General una lista con la totalidad de los nombres de las y los candidatos a ocupar el cargo.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

La propuesta de la o el candidato deberá contener un dictamen debidamente fundado y motivado, que incluya todas las etapas del proceso de selección, además de los elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad y capacidad para el cargo de la o el aspirante.

Una vez elaborada la propuesta de la o el candidato, respaldada con el dictamen respectivo, la Comisión de Vinculación deberá someterla a la consideración del Consejo General con una anticipación no menor a setenta y dos horas previas a la sesión que corresponda.

NOVENA. Designaciones

El Consejo General designará a más tardar el día **1 de noviembre de 2018**, por mayoría de ocho votos, a las Consejeras o Consejeros Electorales que iniciarán el encargo de siete años en el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, especificando, en su caso, el periodo o la conclusión del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, párrafo 1, incisos a), g) y jj), de la Ley General, y del Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

La fecha mencionada en el párrafo anterior será tomada como base para determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Base Tercera, párrafos 3 y 4 de la presente Convocatoria.

Con base en los artículos 24, párrafo 9, y 27 párrafo 4 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, en la designación de las o los Consejeros Electorales correspondientes, se procurará observar el principio de paridad de género considerando la integración del órgano superior de dirección del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes.

El Consejo General deberá ordenar la publicación del acuerdo de designación en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del estado de Aguascalientes, así como comunicar a las autoridades locales la designación. Asimismo, ordenará a la Secretaría Ejecutiva notificar el acuerdo respectivo a la o el ciudadano designado.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

La ciudadana o el ciudadano que haya sido designado como Consejera o Consejero Electoral, deberá acreditar o manifestar bajo protesta de decir verdad, dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación del Acuerdo de designación, que no desempeña ningún empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos relacionados con actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia no remunerados.

La lista que contenga el nombre de las Consejeras o Consejeros Electorales designados será publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

DÉCIMA. Nombramiento y toma de protesta

Las o los ciudadanos que hayan sido designados recibirán el nombramiento que lo acredita como Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes; mismo que contendrá, entre otras cosas el nombre y apellidos, cargo, periodo y fecha de expedición.

Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados rendirán protesta en la fecha que determine el acuerdo de designación que apruebe el Consejo General. Se rendirá protesta en la sede del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes y deberá incluirse el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución Política del estado y las leyes que de ellas emanen, así como el apego a los principios rectores de la función electoral.

Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados no podrán ser reelectos, acorde a lo establecido en el artículo 116, base IV, inciso c), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DÉCIMA PRIMERA. Transparencia

El resultado de cada una de las etapas deberá hacerse público a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y por los demás medios que determine la Comisión de Vinculación, en los términos establecidos para cada etapa en la presente Convocatoria.

La información y documentación que integre los expedientes individuales de las y los aspirantes será confidencial en términos de lo establecido en el artículo 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que no podrá tener otro fin que el previsto en el proceso objeto de la presente Convocatoria, ni ser utilizada o difundida salvo que medie el

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

consentimiento expreso del titular conforme al Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En atención al principio de máxima publicidad, el Instituto realizará la publicación de la información más relevante de cada aspirante, utilizando para este propósito la que se encuentra contenida en el resumen curricular, entregada por cada aspirante al momento de su registro.

DÉCIMA SEGUNDA. Casos no previstos

Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la Comisión de Vinculación, con base en lo dispuesto en el Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

Para mayores informes favor de comunicarse a los teléfonos:

Junta Local Ejecutiva	(01-449) 978-19-19 / (01-449) 978-18-40	
Junta Distrital 01	(01-449) 965-01-21 / (01-449) 965-06-99	Junta Distrital 02 (01-449) 918-77-55 / (01-449) 918-77-57
Junta Distrital 03	(01-449) 996-94-11 / (01-449) 996-94-12	

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero y 41, Base V, apartado C, último párrafo; 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo 1, inciso d); 4, párrafo 2; 6, párrafo 2; 29, párrafo 1; 30, párrafo 2; 31, párrafos 1 y 4; 32, párrafo 2, inciso b); 39, párrafo 2; 42, párrafos 5, 6, 8 y 10; 43; 44, párrafo 1, incisos a), g) y jj); 45, párrafo 1, inciso a); 46, párrafo 1, inciso k); 60 inciso e); 99, párrafo 1; 100 y 101, de la Ley General; 73, inciso i) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

CONVOCA:

A las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 100, párrafos 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante Ley General); y artículo 9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, y deseen participar en el proceso de selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, a solicitar su registro y presentar su documentación de aspirante conforme a las siguientes:

BASES:

PRIMERA. Aspectos generales

Las y los aspirantes interesados en participar en el proceso de selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, deberán llenar los formatos que para tal efecto se pondrán a disposición en el portal del Instituto www.ine.mx, desde el **23 de julio al 17 de agosto 2018**.

Una vez requisitados los formatos, deberán imprimirse, **verificar que la información capturada se encuentre completa al imprimir el formato** y firmarse. Los formatos tendrán como único propósito recabar la información de las y los aspirantes, por lo que en ningún caso se podrán considerar como una constancia de registro al proceso de selección y designación.

Tanto los formatos como la documentación solicitada en la presente Convocatoria se recibirán del **13 al 17 de agosto de 2018**, en las oficinas de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas o en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).

Quien así lo requiera podrá asistir a las oficinas antes mencionadas para ser auxiliados en el llenado de los formatos.

La recepción de solicitudes debidamente requisitadas se realizará ante los siguientes órganos del Instituto Nacional Electoral:

Secretaría Ejecutiva

Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio A, Planta Alta, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México, C.P. 14610.

Junta Local Ejecutiva

Avenida Reforma No. 777, Primera Sección esquina con Pedro F. Pérez y Ramírez, Mexicali, Baja California, C. P. 21100.

Junta Distrital 01

Avenida Lázaro Cárdenas 1776, Locales 1 al 7, Colonia Rancho La Bodega, Mexicali, Baja California, C. P. 21379.

Junta Distrital 02

Calle "E" No. 451 Colonia Nueva 2a. Sección, entre Avenida Sebastian Lerdo de Tejada y Avenida Ignacio Zaragoza, Mexicali, Baja California, C. P. 21100.

Junta Distrital 03

Boulevard de los Lagos Núm. 257, Fraccionamiento Valle Dorado, Ensenada, Baja California, C. P. 22890.

Junta Distrital 04

Calle 6 de Enero No. 21460, Colonia Lomas del Matamoros, Tijuana, Baja California, C. P. 22206.

Junta Distrital 05

Río Balsas No. 2092 entre Avenida Río Suchiate y Callejón Grijalva, Colonia Marrón, Tijuana, Baja California, C. P. 22015.

Junta Distrital 06

Calle Segunda y Benito Juárez No. 7625, Colonia Centro, entre Avenida 5 de Mayo y Mutualismo, Tijuana, Baja California, C. P. 22000.

Junta Distrital 07

Prado del Rey, Colonia Villa las Lomas, Mexicali, Baja California, C. P. 21355.

Junta Distrital 08

Boulevard Gustavo Diaz Ordaz No. 15655, Locales 10 y 12, y del 12 al 19, Colonia Maurilio Magallón, Delegación de La Mesa, Tijuana, Baja California, C. P. 22116.

Las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 100, párrafo 2 de la Ley General y en el artículo 9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, podrán inscribirse como aspirantes al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California.

De conformidad con el artículo 13, párrafo 4, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, las y los aspirantes que participen en el proceso de selección y designación en todo momento deberán mantener el cumplimiento de requisitos; de no ser así, la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante Comisión de Vinculación), descartará a la o el aspirante que se encuentre en este supuesto en cualquier etapa del proceso.

SEGUNDA. Cargo y periodo a designar.

El proceso de selección tiene como propósito designar a tres Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral de Baja California, que durarán en su encargo siete años, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 101, párrafo 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

TERCERA. Requisitos.

Las y los interesados en ocupar el cargo referido en la Base Segunda deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
2. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente;
3. Tener más de 30 años cumplidos al día de la designación;
4. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel licenciatura;
5. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
6. Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
7. No haber sido registrado como candidata o candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación;
8. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación;
9. No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;
10. No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación como de las entidades federativas, ni subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno. No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni Gobernadora o Gobernador, ni Secretaria o Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser Presidenta o Presidente Municipal, Síndico (a) o Regidor (a) o titular de dependencia de los Ayuntamientos; y
11. No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California o de cualquier otra entidad federativa.

CUARTA. Documentación a entregar.

Las y los interesados deberán presentar la siguiente documentación:

1. Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto;
2. Copia certificada del acta de nacimiento;
3. En caso de no ser originario de la entidad federativa correspondiente, deberá presentar una constancia que acredite una residencia efectiva en la entidad de por lo menos cinco años anteriores a la fecha de designación establecida en la Convocatoria; dicha constancia deberá ser expedida por autoridad competente. En su caso, el documento con el que compruebe ubicarse en una excepción por razón de ausencia del país por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
4. Original y copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, para su certificación;
5. Dos fotografías recientes tamaño infantil a color;
6. Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la solicitud con una antigüedad máxima de tres meses;
7. Copia certificada del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha de expedición mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la Convocatoria para la designación;
8. Currículum vitae firmado por la o el aspirante a través del formato que para tal efecto estará disponible en el portal del Instituto, el cual deberá contener, entre otros datos: nombre y apellidos completos, domicilio, teléfonos y correo electrónico, estudios realizados, trayectoria laboral, académica, política, docente y profesional, publicaciones, actividad empresarial, cargos de elección popular, organizaciones de cualquier tipo a las que pertenezca y el carácter de su participación, así como el empleo, cargo o comisión que, en su caso, desempeñe al momento del registro;
9. Resumen curricular con una extensión máxima de una cuartilla con letra Arial 12, para su eventual publicación, por lo que no deberá contener datos personales privados. Para lo anterior, deberá emplear el formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto; y
10. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa (empleando el formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto), en la que se manifieste:
 - a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

- b) No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
- c) No haber sido registrado como candidata o candidato a cargo alguno de elección popular durante los cuatro años anteriores a la designación;
- d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación;
- e) No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;
- f) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno federal o de las entidades federativas, ni subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno;
- g) No ser jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni gobernadora o gobernador, ni secretaria o secretario de gobierno o su equivalente a nivel local;
- h) No ser jefe o jefa delegacional, presidenta o presidente municipal, síndica o síndico o regidora o regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos;
- i) No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California o de cualquier otra entidad federativa;
- j) La aceptación de dar por concluido todo empleo, cargo o comisión en caso de ser designado como Consejera o Consejero Presidente;
- k) Toda la información que, con motivo del proceso de selección a que se refiere la Convocatoria, ha proporcionado o llegue a proporcionar es veraz y toda la documentación que ha entregado o llegue a entregar es auténtica;
- l) La aceptación de sujetarse a la Convocatoria y a las reglas establecidas en el presente proceso de selección; y
- m) Consentimiento para que sus datos personales sean utilizados únicamente para los fines de la convocatoria.

Los formatos para la presentación de los requisitos establecidos en los párrafos 1, 8, 9 y 10, estarán disponibles en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en las oficinas del Instituto Nacional Electoral.

Si fuera el caso de que las y los interesados, con motivo de alguna convocatoria anterior hubieran presentado al Instituto Nacional Electoral copia certificada del acta de nacimiento; del título o cédula profesional de nivel licenciatura y los mismos obraran en los archivos del Instituto, deberán hacerlo del conocimiento en su solicitud de registro de la presente Convocatoria, los cuales se ubicarán en una situación de excepción para exhibirlos, una vez que la autoridad nacional electoral verifique su resguardo documental.

De ser el caso que la solicitud de la o el aspirante se realice el día 17 de agosto de 2018, la Unidad Técnica contará con el término de veinticuatro horas para verificar en sus archivos la existencia de dichos documentos, y en caso de que no cuente con ellos, requerirá a la o el aspirante para que dentro del término de cuarenta y ocho horas los remita digitalizados a través de correo electrónico y de igual forma en forma física, a través de la Junta Local o Distrital de su entidad federativa.

QUINTA. Plazos y horarios para el registro

Las y los aspirantes deberán presentar los formatos referidos en las Bases Primera y Cuarta para solicitar su registro del **13 al 17 de agosto de 2018**, en la Secretaría Ejecutiva, en la Junta Local Ejecutiva o en las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral correspondientes al estado de Baja California, en los domicilios citados en la Base Primera de la presente Convocatoria, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).

SEXTA. Notificaciones.

Todas las notificaciones se harán mediante el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, salvo aquéllas que deban realizarse de manera personal a las y los aspirantes, mismas que se harán mediante el correo electrónico que hayan registrado y que deberán ser acusadas de recibido por los aspirantes de forma inmediata a su recepción, en el entendido de que quienes no lo hagan dentro de las veinticuatro horas posteriores a su envío, se darán por debidamente notificados.

Las ciudadanas o ciudadanos designados por el Consejo General serán notificados en los términos del artículo 24, párrafo 7, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

SÉPTIMA. Etapas del proceso de selección y designación.

El proceso de selección de las Consejeras o Consejeros Electorales del órgano superior de dirección del Instituto Estatal Electoral de Baja California se desarrollará de conformidad con las siguientes etapas:

1. Registro de aspirantes. Las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en el estado de Baja California, así como la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral recibirán, en las fechas establecidas en la Base Quinta de la presente Convocatoria, las solicitudes y la documentación que presenten las y los aspirantes o por persona autorizada por escrito, siempre y cuando en la solicitud aparezca la firma autógrafa de dichos aspirantes para ocupar el cargo convocado. Cada órgano receptor será el responsable de concentrar las solicitudes y documentación correspondiente para la integración de los expedientes.

En las sedes de las Juntas Local y Distritales del estado de Baja California, así como de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, se proporcionará el apoyo necesario para llevar a cabo el registro en el sistema habilitado para la presente Convocatoria.

Al momento de presentar la solicitud de registro y entregar la documentación correspondiente, las y los aspirantes recibirán un acuse con un folio asignado y la descripción de la información y documentación entregada al Instituto, el cual deberán firmar de conformidad. El mencionado comprobante tendrá como único propósito acusar de recibida la documentación ahí referida, por lo que en ningún caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos de esta Convocatoria.

La Junta Local Ejecutiva será la responsable de concentrar los expedientes de las y los aspirantes que se presenten ante la misma y ante las Juntas Distritales Ejecutivas, elaborando una lista de aquéllos que presentaron su solicitud, señalando las inconsistencias u omisiones en los documentos presentados, las cuales serán puestas a consideración de la Comisión de Vinculación.

A más tardar el **20 de agosto de 2018**, la Junta Local Ejecutiva remitirá los expedientes a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante Unidad de Vinculación) para que ésta los entregue tanto en físico como en versión electrónica al Presidente de la Comisión de Vinculación. Al resto de las y los Consejeros del Consejo General se les entregará una copia en medio electrónico.

Los expedientes originales estarán bajo resguardo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación, quien los pondrá a disposición para consulta de las y los integrantes del Consejo General y de la propia Comisión.

La Secretaría Ejecutiva y las Juntas Local y Distritales no podrán descartar o rechazar solicitud alguna que se les presente. En caso de que algún aspirante no entregue la totalidad de la documentación, podrá subsanar la omisión siempre y cuando se encuentre dentro del periodo de registro establecido en la presente Convocatoria o a solicitud expresa de la Unidad de Vinculación.

2. Verificación de los requisitos legales. La Comisión de Vinculación, con el apoyo de los grupos de trabajo que en su caso se conformen, verificará el cumplimiento de los requisitos legales, y aprobará, a más tardar el **28 de agosto de 2018**, el Acuerdo que contenga la relación con los nombres y apellidos de las y los aspirantes que cumplen con todos los requisitos y ordenará su publicación, agregando el resumen curricular de cada uno de los aspirantes.

En el mismo Acuerdo, la Comisión de Vinculación aprobará la sede y horario en que se aplicará el examen de conocimientos.

La Unidad de Vinculación publicará la guía de estudio y las condiciones del examen de conocimientos, en la misma fecha en la que se habiliten los formatos de registro de aspirantes en la página del Instituto; es decir, el **23 de julio**.

La información prevista en los párrafos anteriores deberá ser publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas en el estado de Baja California.

3. Examen de conocimientos. Las y los aspirantes que hayan cumplido con todos los requisitos legales serán convocados a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, para presentar el examen de conocimientos, mismo que tendrá verificativo el día **1 de septiembre de 2018**, en la sede previamente definida y publicada en el portal del Instituto por la Unidad de Vinculación. La fecha para la presentación del examen será inamovible, por lo que no podrá aplicarse en otra diversa, por ninguna causa.

El examen comprenderá dos apartados: el primero, de competencias básicas, que comprende las áreas comunicativa y matemática, el cual tendrá una ponderación en la calificación de 40%. El segundo será de conocimientos técnicos, y

comprenderá las áreas teórico-normativa y de procedimientos electorales, el cual tendrá una ponderación en la calificación de 60%.

La estructura y el contenido del examen de conocimientos serán debidamente establecidos en la guía de estudios que se publicará en la página del Instituto.

Las y los aspirantes deberán identificarse con credencial para votar o identificación oficial con fotografía vigente. La aplicación y evaluación del examen de conocimientos estará a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).

La Comisión de Vinculación solicitará al Ceneval que la entrega de los resultados se realice con listas diferenciadas de mujeres y hombres, en orden de mayor a menor calificación. De tal manera que pasarán a la siguiente etapa 12 aspirantes mujeres y 12 aspirantes hombres que obtengan la mejor calificación, siempre y cuando ésta sea igual o mayor a seis. En caso de empate en la posición número 12, accederán las y los aspirantes que se encuentren en este supuesto.

Los resultados del examen de conocimientos se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día **13 de septiembre de 2018**, ordenados de mayor a menor calificación y diferenciando las listas de la forma siguiente:

- a) Nombre de las aspirantes que acceden a la siguiente etapa;
- b) Nombre de los aspirantes que acceden a la siguiente etapa; y
- c) Folios de las y los aspirantes que no pasan a la siguiente etapa.

A partir de dicha publicación, las y los aspirantes que no hubiesen accedido a la siguiente etapa, tendrán hasta el día **17 de septiembre de 2018** para en su caso, solicitar por escrito al correo electrónico revisiones.utvopl@ine.mx o ante la Unidad de Vinculación, la revisión del examen, misma que tendrá verificativo a partir del día **18 de septiembre de 2018**. La Unidad de Vinculación notificará a las y los solicitantes a través del correo electrónico que hayan proporcionado, la fecha, hora y lugar para la realización de la sesión de revisión. En todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la Ciudad de México.

Para la revisión del examen, se llevará a cabo una sesión por cada solicitante y a la misma acudirán personalmente la o el aspirante, un representante de Ceneval, y un

representante de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación o la o el funcionario que ésta designe, quien levantará un acta de revisión de examen que deberá ser firmada por quienes intervengan en dicho acto. Para el desahogo de dicha sesión, la Institución evaluadora del examen proporcionará a la Secretaría Técnica todos los elementos necesarios para salvaguardar el derecho de audiencia y debido proceso del solicitante.

Si los resultados de la revisión realizada determinan que la o el sustentante obtuvo una calificación igual o superior a la posición 12, la Comisión de Vinculación ordenará su inclusión en la siguiente etapa, sin perjuicio de las y los aspirantes ya incluidos en las listas publicadas.

Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

4. Ensayo presencial. Las y los aspirantes que acrediten la etapa del examen de conocimientos, presentarán un ensayo de manera presencial, el **22 de septiembre de 2018**.

El Consejo General aprobará los lineamientos que establezcan lo siguiente:

- a) La institución de educación superior, de investigación o evaluación responsable de la aplicación y calificación de los ensayos presenciales;
- b) Criterios para la elaboración y dictamen de los ensayos presenciales;
- c) Requisitos formales para la aplicación del ensayo; y
- d) Fecha de entrega de resultados por parte de la institución educativa designada.

Los lineamientos aprobados serán notificados a las y los aspirantes, así como las sedes y horarios de aplicación, a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. La fecha para la elaboración del ensayo será inamovible, por lo que no podrá presentarse en otra fecha, bajo ningún motivo.

A través de la elaboración y presentación del ensayo, las y los aspirantes serán evaluados sobre la habilidad que posean para definir, situar y delimitar un problema del ámbito electoral, a partir de la delimitación y contextualización de un problema central, de la identificación de los actores relevantes y los escenarios posibles, analizar los riesgos y oportunidades, para desarrollar propuesta operativas a efecto de gestionar o resolver los problemas identificados; no así sobre su postura u opinión particular con respecto al tema desarrollado. De esta manera, el ensayo

permitirá calificar la capacidad de análisis, el desarrollo argumentativo, el planteamiento del problema y el desarrollo de escenarios y posibles soluciones, con el objeto de establecer una estrategia y una ruta crítica de acción con base en las atribuciones y competencias legales de los Organismos Públicos Locales.

La aplicación de los ensayos y su dictamen estará a cargo de la institución designada, que determinará quiénes son las y los aspirantes cuyo ensayo sea dictaminado como idóneo. Los ensayos serán evaluados por tres académicos que determine la propia institución y será idóneo el ensayo de la o el aspirante que obtenga al menos dos dictámenes favorables.

La institución designada entregará los tres dictámenes de cada uno de las y los aspirantes a la Comisión de Vinculación, a través de la Unidad de Vinculación a más tardar el día **11 de octubre de 2018**.

Los resultados del ensayo se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día **11 de octubre de 2018**, en listas diferenciadas, de acuerdo con lo siguiente:

- a) Nombre de las aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
- b) Nombre de los aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
- c) Folios de las y los aspirantes con dictamen de ensayo no idóneo.

Una vez que se tenga la lista de las y los aspirantes que hayan resultado con dictamen idóneo en el ensayo, la Comisión de Vinculación la hará de conocimiento público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y la notificará a las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, quienes podrán presentar por escrito, dentro de los cinco días hábiles siguientes, ante la misma Comisión, las observaciones y comentarios que consideren convenientes respecto de cada una de las y los aspirantes; el escrito deberá acompañarse de los elementos objetivos que sustenten o corroboren sus afirmaciones.

A partir de dicha publicación, aquellos aspirantes cuyo ensayo haya sido dictaminado como no idóneo, tendrán derecho a solicitar por escrito, hasta el día **15 de octubre de 2018**, su revisión ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Baja California o directamente ante la Unidad de Vinculación. La diligencia de revisión de ensayo deberá efectuarse a partir del día **16 de octubre de 2018**. En todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la Ciudad de México.

Si los resultados de la revisión realizada arrojan que el ensayo de la o el aspirante obtuvo un dictamen idóneo, la Comisión de Vinculación lo hará del conocimiento de las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para que en un término de dos días hábiles emitan las observaciones a que haya lugar en los términos precitados.

Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

Concluido el plazo de observaciones de las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, la Comisión de Vinculación hará del conocimiento público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, la relación de quienes, al no tener algún impedimento legal y habiendo aprobado las etapas anteriores, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista, conforme al calendario que apruebe la Comisión de Vinculación para tal efecto.

5. Valoración curricular y entrevista. Para los efectos de esta Convocatoria, la valoración curricular y la entrevista serán consideradas una misma etapa.

Las y los aspirantes cuyo ensayo resulte idóneo y se considere que no existen elementos objetivos aportados por las y los representantes de los partidos políticos o por Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para descalificarlos como aspirantes, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista.

El Consejo General, a propuesta de la Comisión de Vinculación, aprobará los criterios para realizar la valoración curricular y la entrevista, los que deberán considerar al menos lo siguiente:

- a) Propósito;
- b) Responsables de conducir las entrevistas;
- c) Procedimiento para la calificación;
- d) Las competencias a valorar;
- e) Ponderación que se utilizará para la calificación;
- f) Instrumento que se utilizará para la calificación.

Los criterios que apruebe el Consejo General serán notificados a las y los aspirantes a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx

Esta etapa estará a cargo de las y los Consejeros Electorales del Instituto, los cuales conformarán grupos de entrevistadores.

Al efecto, se procurará un equilibrio entre géneros en la conformación de las listas de las y los aspirantes que accedan a dicha etapa, para lo cual, la Comisión de Vinculación integrará las listas diferenciadas de hombres y mujeres cuyo ensayo presencial haya sido dictaminado como idóneo.

Las entrevistas se realizarán conforme al calendario y sedes que previamente apruebe la Comisión de Vinculación. La información sobre el calendario y la sede se publicará en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. Asimismo, se notificará a las y los aspirantes al correo electrónico proporcionado por los mismos, debiendo acusar de recibida dicha actuación. De la misma forma, se publicará en los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en el estado de Baja California.

Las entrevistas serán transmitidas en tiempo real en el portal del Instituto www.ine.mx, serán grabadas en video y estarán disponibles en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral.

En la etapa de valoración curricular y entrevista se identificará que el perfil de las y los aspirantes se apegue a los principios rectores de la función electoral y cuente con las competencias indispensables para determinar la idoneidad de las y los aspirantes para el desempeño del cargo.

La entrevista será presencial, se realizará en panel con al menos tres Consejeros o Consejeras Electorales, y deberá atender al proceso siguiente:

- a) **Antes de la entrevista.** Las y los aspirantes deberán presentarse por lo menos 30 minutos previos a la hora de inicio de la entrevista.
- b) **Durante la entrevista.** Se conforma de tres etapas: apertura, desarrollo y cierre; tendrá una duración de hasta 20 minutos.
- c) **Después de la entrevista.** Al finalizar el proceso de entrevista, cada Consejera o Consejero Electoral deberá asentar el valor cuantificable de cada uno de los rubros que conforman la cédula de valoración curricular y entrevista.

Excepcionalmente, previa causa justificada, las entrevistas podrán llevarse a cabo de manera virtual mediante el uso de tecnologías de la información.

Las y los Consejeros Electorales del Consejo General podrán utilizar cualquier documento, insumo o herramienta que coadyuve a la realización de la entrevista.

En atención al principio de máxima publicidad, las cédulas de los aspirantes se harán públicas en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

OCTAVA. Integración de las listas de candidatas y candidatos

Conforme a lo previsto en los artículos 100, párrafos 1 y 3 y 101, párrafos 1, inciso f), 3 y 4 de la Ley General y 24, párrafo 1, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, la Comisión de Vinculación presentará al Consejo General una lista con la totalidad de los nombres de las y los candidatos a ocupar el cargo.

La propuesta de la o el candidato deberá contener un dictamen debidamente fundado y motivado, que incluya todas las etapas del proceso de selección, además de los elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad y capacidad para el cargo de la o el aspirante.

Una vez elaborada la propuesta de la o el candidato, respaldada con el dictamen respectivo, la Comisión de Vinculación deberá someterla a la consideración del Consejo General con una anticipación no menor a setenta y dos horas previas a la sesión que corresponda.

NOVENA. Designaciones

El Consejo General designará a más tardar el día **1 de noviembre de 2018**, por mayoría de ocho votos, a las Consejeras o Consejeros Electorales que iniciarán el encargo de siete años en el Instituto Estatal Electoral de Baja California, especificando, en su caso, el periodo o la conclusión del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, párrafo 1, incisos a), g) y jj), de la Ley General, y del Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

La fecha mencionada en el párrafo anterior será tomada como base para determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Base Tercera, párrafos 3 y 4 de la presente Convocatoria.

Con base en los artículos 24, párrafo 9, y 27 párrafo 4 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, en la designación de las o los Consejeros Electorales correspondientes, se procurará observar el principio de paridad de género considerando la integración del órgano superior de dirección del Instituto Estatal Electoral de Baja California.

El Consejo General deberá ordenar la publicación del acuerdo de designación en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del estado de Baja California, así como comunicar a las autoridades locales la designación. Asimismo, ordenará a la Secretaría Ejecutiva notificar el acuerdo respectivo a la o el ciudadano designado.

La ciudadana o el ciudadano que haya sido designado como Consejera o Consejero Electoral, deberá acreditar o manifestar bajo protesta de decir verdad, dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación del Acuerdo de designación, que no desempeña ningún empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos relacionados con actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia no remunerados.

La lista que contenga el nombre de las Consejeras o Consejeros Electorales designados será publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

DÉCIMA. Nombramiento y toma de protesta

Las o los ciudadanos que hayan sido designados recibirán el nombramiento que lo acredita como Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral de Baja California; mismo que contendrá, entre otras cosas el nombre y apellidos, cargo, periodo y fecha de expedición.

Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados rendirán protesta en la fecha que determine el acuerdo de designación que apruebe el Consejo General. Se rendirá protesta en la sede del Instituto Estatal Electoral de Baja California y

deberá incluirse el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución Política del estado y las leyes que de ellas emanen, así como el apego a los principios rectores de la función electoral.

Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados no podrán ser reelectos, acorde a lo establecido en el artículo 116, base IV, inciso c), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DÉCIMA PRIMERA. Transparencia

El resultado de cada una de las etapas deberá hacerse público a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y por los demás medios que determine la Comisión de Vinculación, en los términos establecidos para cada etapa en la presente Convocatoria.

La información y documentación que integre los expedientes individuales de las y los aspirantes será confidencial en términos de lo establecido en el artículo 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que no podrá tener otro fin que el previsto en el proceso objeto de la presente Convocatoria, ni ser utilizada o difundida salvo que medie el consentimiento expreso del titular conforme al Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En atención al principio de máxima publicidad, el Instituto realizará la publicación de la información más relevante de cada aspirante, utilizando para este propósito la que se encuentra contenida en el resumen curricular, entregada por cada aspirante al momento de su registro.

DÉCIMA SEGUNDA. Casos no previstos

Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la Comisión de Vinculación, con base en lo dispuesto en el Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

Para mayores informes favor de comunicarse a los teléfonos:

Junta Local Ejecutiva (01-686) 551-74-53

Junta Distrital 01 (01-686) 580-01-29 **Junta Distrital 02** (01-686) 552-60-26 Ext. 104

Junta Distrital 03 (01-646) 178-80-01 **Junta Distrital 04** (01-664) 102-58-16 /
Ext. 16 (01-664) 102-58-17

Junta Distrital 05 (01-664) 681-81-02 **Junta Distrital 06** (01-664) 688-29-80 Ext. 103
Ext. 14

Junta Distrital 07 (01-686) 838-94-45 **Junta Distrital 08** (01-664) 660-76-74

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero y 41, Base V, apartado C, último párrafo; 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo 1, inciso d); 4, párrafo 2; 6, párrafo 2; 29, párrafo 1; 30, párrafo 2; 31, párrafos 1 y 4; 32, párrafo 2, inciso b); 39, párrafo 2; 42, párrafos 5, 6, 8 y 10; 43; 44, párrafo 1, incisos a), g) y jj); 45, párrafo 1, inciso a); 46, párrafo 1, inciso k); 60 inciso e); 99, párrafo 1; 100 y 101, de la Ley General; 73, inciso i) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

CONVOCA:

A las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 100, párrafos 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante Ley General); y artículo 9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, y deseen participar en el proceso de selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, a solicitar su registro y presentar su documentación de aspirante conforme a las siguientes:

BASES:

PRIMERA. Aspectos generales

Las y los aspirantes interesados en participar en el proceso de selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, deberán llenar los formatos que para tal efecto se pondrán a disposición en el portal del Instituto www.ine.mx, desde el **23 de julio al 17 de agosto 2018**.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Una vez requisitados los formatos, deberán imprimirse, **verificar que la información capturada se encuentre completa al imprimir el formato** y firmarse. Los formatos tendrán como único propósito recabar la información de las y los aspirantes, por lo que en ningún caso se podrán considerar como una constancia de registro al proceso de selección y designación.

Tanto los formatos como la documentación solicitada en la presente Convocatoria se recibirán del **13 al 17 de agosto de 2018**, en las oficinas de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas o en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).

Quien así lo requiera podrá asistir a las oficinas antes mencionadas para ser auxiliados en el llenado de los formatos.

La recepción de solicitudes debidamente requisitadas se realizará ante los siguientes órganos del Instituto Nacional Electoral:

Secretaría Ejecutiva

Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio A, Planta Alta, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México, C.P. 14610.

Junta Local Ejecutiva

Avenida Independencia No. 1410, Colonia Centro, Chihuahua, Chihuahua, C. P. 31000.

Junta Distrital 01

Hacienda del Portal No. 10120, Fraccionamiento Hacienda de Las Torres II, Ciudad Juárez, Chihuahua, C. P. 32695.

Junta Distrital 02

Avenida Internacional No. 369, Colonia Waterfill Río Bravo, Ciudad Juárez, Chihuahua, C. P. 32553.

Junta Distrital 03

Avenida de los Aztecas No. 9131, Colonia Ciudad Moderna, Ciudad Juárez, Chihuahua, C. P. 32670.

Junta Distrital 04

Calle Catalina No. 5916, Fraccionamiento Lomas del Rey, Ciudad. Juárez, Chihuahua, C. P. 32651.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Junta Distrital 05

Avenida 7a. Oriente No. 703 Altos, Colonia Centro, Delicias, Chihuahua, C. P. 33000.

Junta Distrital 06

División del Norte No. 802, Colonia San Felipe, Chihuahua, Chihuahua, C. P. 31240.

Junta Distrital 07

Avenida Manuel Ojinaga No. 121 Altos, Zona Centro, Cuauhtémoc, Chihuahua, C. P. 31500.

Junta Distrital 08

Calle Pino No. 2307-2, Fraccionamiento Satélite, Chihuahua, Chihuahua, C. P. 31104.

Junta Distrital 09

Avenida Independencia No. 147, Colonia Centro, Hidalgo del Parral, Chihuahua, C. P. 33860.

Las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 100, párrafo 2 de la Ley General y en el artículo 9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, podrán inscribirse como aspirantes al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.

De conformidad con el artículo 13, párrafo 4, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, las y los aspirantes que participen en el proceso de selección y designación en todo momento deberán mantener el cumplimiento de requisitos; de no ser así, la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante Comisión de Vinculación), descartará a la o el aspirante que se encuentre en este supuesto en cualquier etapa del proceso.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

SEGUNDA. Cargo y periodo a designar.

El proceso de selección tiene como propósito designar a tres Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, que durarán en su encargo siete años, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 101, párrafo 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

TERCERA. Requisitos.

Las y los interesados en ocupar el cargo referido en la Base Segunda deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
2. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente;
3. Tener más de 30 años cumplidos al día de la designación;
4. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel licenciatura;
5. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
6. Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
7. No haber sido registrado como candidata o candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación;
8. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación;
9. No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;
10. No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación como de las entidades federativas, ni subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno. No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni Gobernadora o Gobernador, ni Secretaria o Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser Presidenta o Presidente Municipal, Síndico (a) o Regidor (a) o titular de dependencia de los Ayuntamientos; y

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

11. No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua o de cualquier otra entidad federativa.

CUARTA. Documentación a entregar.

Las y los interesados deberán presentar la siguiente documentación:

1. Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto;
2. Copia certificada del acta de nacimiento;
3. En caso de no ser originario de la entidad federativa correspondiente, deberá presentar una constancia que acredite una residencia efectiva en la entidad de por lo menos cinco años anteriores a la fecha de designación establecida en la Convocatoria; dicha constancia deberá ser expedida por autoridad competente. En su caso, el documento con el que compruebe ubicarse en una excepción por razón de ausencia del país por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
4. Original y copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, para su certificación;
5. Dos fotografías recientes tamaño infantil a color;
6. Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la solicitud con una antigüedad máxima de tres meses;
7. Copia certificada del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha de expedición mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la Convocatoria para la designación;
8. Currículum vitae firmado por la o el aspirante a través del formato que para tal efecto estará disponible en el portal del Instituto, el cual deberá contener, entre otros datos: nombre y apellidos completos, domicilio, teléfonos y correo electrónico, estudios realizados, trayectoria laboral, académica, política, docente y profesional, publicaciones, actividad empresarial, cargos de elección popular, organizaciones de cualquier tipo a las que pertenezca y el carácter de su participación, así como el empleo, cargo o comisión que, en su caso, desempeñe al momento del registro;
9. Resumen curricular con una extensión máxima de una cuartilla con letra Arial 12, para su eventual publicación, por lo que no deberá contener datos personales privados. Para lo anterior, deberá emplear el formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto; y

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

10. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa (empleando el formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto), en la que se manifieste:
- a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
 - b) No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
 - c) No haber sido registrado como candidata o candidato a cargo alguno de elección popular durante los cuatro años anteriores a la designación;
 - d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación;
 - e) No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;
 - f) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno federal o de las entidades federativas, ni subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno;
 - g) No ser jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni gobernadora o gobernador, ni secretaria o secretario de gobierno o su equivalente a nivel local;
 - h) No ser jefe o jefa delegacional, presidenta o presidente municipal, síndica o síndico o regidora o regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos;
 - i) No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua o de cualquier otra entidad federativa;
 - j) La aceptación de dar por concluido todo empleo, cargo o comisión en caso de ser designado como Consejera o Consejero Presidente;
 - k) Toda la información que, con motivo del proceso de selección a que se refiere la Convocatoria, ha proporcionado o llegue a proporcionar es veraz y toda la documentación que ha entregado o llegue a entregar es auténtica;
 - l) La aceptación de sujetarse a la Convocatoria y a las reglas establecidas en el presente proceso de selección; y

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

- m) Consentimiento para que sus datos personales sean utilizados únicamente para los fines de la convocatoria.

Los formatos para la presentación de los requisitos establecidos en los párrafos 1, 8, 9 y 10, estarán disponibles en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en las oficinas del Instituto Nacional Electoral.

Si fuera el caso de que las y los interesados, con motivo de alguna convocatoria anterior hubieran presentado al Instituto Nacional Electoral copia certificada del acta de nacimiento; del título o cédula profesional de nivel licenciatura y los mismos obraran en los archivos del Instituto, deberán hacerlo del conocimiento en su solicitud de registro de la presente Convocatoria, los cuales se ubicarán en una situación de excepción para exhibirlos, una vez que la autoridad nacional electoral verifique su resguardo documental.

De ser el caso que la solicitud de la o el aspirante se realice el día 17 de agosto de 2018, la Unidad Técnica contará con el término de veinticuatro horas para verificar en sus archivos la existencia de dichos documentos, y en caso de que no cuente con ellos, requerirá a la o el aspirante para que dentro del término de cuarenta y ocho horas los remita digitalizados a través de correo electrónico y de igual forma en forma física, a través de la Junta Local o Distrital de su entidad federativa.

QUINTA. Plazos y horarios para el registro

Las y los aspirantes deberán presentar los formatos referidos en las Bases Primera y Cuarta para solicitar su registro del **13 al 17 de agosto de 2018**, en la Secretaría Ejecutiva, en la Junta Local Ejecutiva o en las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral correspondientes al estado de Chihuahua, en los domicilios citados en la Base Primera de la presente Convocatoria, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).

SEXTA. Notificaciones.

Todas las notificaciones se harán mediante el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, salvo aquéllas que deban realizarse de manera personal a las y los aspirantes, mismas que se harán mediante el correo electrónico que hayan registrado y que deberán ser acusadas de recibido por los aspirantes de forma inmediata a su recepción, en el entendido de que quienes no lo hagan dentro de las veinticuatro horas posteriores a su envío, se darán por debidamente notificados.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Las ciudadanas o ciudadanos designados por el Consejo General serán notificados en los términos del artículo 24, párrafo 7, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

SÉPTIMA. Etapas del proceso de selección y designación.

El proceso de selección de las Consejeras o Consejeros Electorales del órgano superior de dirección del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua se desarrollará de conformidad con las siguientes etapas:

1. Registro de aspirantes. Las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chihuahua, así como la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral recibirán, en las fechas establecidas en la Base Quinta de la presente Convocatoria, las solicitudes y la documentación que presenten las y los aspirantes o por persona autorizada por escrito, siempre y cuando en la solicitud aparezca la firma autógrafa de dichos aspirantes para ocupar el cargo convocado. Cada órgano receptor será el responsable de concentrar las solicitudes y documentación correspondiente para la integración de los expedientes.

En las sedes de las Juntas Local y Distritales del estado de Chihuahua, así como de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, se proporcionará el apoyo necesario para llevar a cabo el registro en el sistema habilitado para la presente Convocatoria.

Al momento de presentar la solicitud de registro y entregar la documentación correspondiente, las y los aspirantes recibirán un acuse con un folio asignado y la descripción de la información y documentación entregada al Instituto, el cual deberán firmar de conformidad. El mencionado comprobante tendrá como único propósito acusar de recibida la documentación ahí referida, por lo que en ningún caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos de esta Convocatoria.

La Junta Local Ejecutiva será la responsable de concentrar los expedientes de las y los aspirantes que se presenten ante la misma y ante las Juntas Distritales Ejecutivas, elaborando una lista de aquéllos que presentaron su solicitud, señalando las inconsistencias u omisiones en los documentos presentados, las cuales serán puestas a consideración de la Comisión de Vinculación.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

A más tardar el **20 de agosto de 2018**, la Junta Local Ejecutiva remitirá los expedientes a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante Unidad de Vinculación) para que ésta los entregue tanto en físico como en versión electrónica al Presidente de la Comisión de Vinculación. Al resto de las y los Consejeros del Consejo General se les entregará una copia en medio electrónico.

Los expedientes originales estarán bajo resguardo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación, quien los pondrá a disposición para consulta de las y los integrantes del Consejo General y de la propia Comisión.

La Secretaría Ejecutiva y las Juntas Local y Distritales no podrán descartar o rechazar solicitud alguna que se les presente. En caso de que algún aspirante no entregue la totalidad de la documentación, podrá subsanar la omisión siempre y cuando se encuentre dentro del periodo de registro establecido en la presente Convocatoria o a solicitud expresa de la Unidad de Vinculación.

2. Verificación de los requisitos legales. La Comisión de Vinculación, con el apoyo de los grupos de trabajo que en su caso se conformen, verificará el cumplimiento de los requisitos legales, y aprobará, a más tardar el **28 de agosto de 2018**, el Acuerdo que contenga la relación con los nombres y apellidos de las y los aspirantes que cumplen con todos los requisitos y ordenará su publicación, agregando el resumen curricular de cada uno de los aspirantes.

En el mismo Acuerdo, la Comisión de Vinculación aprobará la sede y horario en que se aplicará el examen de conocimientos.

La Unidad de Vinculación publicará la guía de estudio y las condiciones del examen de conocimientos, en la misma fecha en la que se habiliten los formatos de registro de aspirantes en la página del Instituto; es decir, el **23 de julio**.

La información prevista en los párrafos anteriores deberá ser publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas en el estado de Chihuahua.

3. Examen de conocimientos. Las y los aspirantes que hayan cumplido con todos los requisitos legales serán convocados a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, para presentar el examen de conocimientos, mismo que tendrá verificativo el día **1 de septiembre de 2018**, en la sede previamente definida y publicada en el portal del Instituto por la Unidad de Vinculación. La fecha para la

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

presentación del examen será inamovible, por lo que no podrá aplicarse en otra diversa, por ninguna causa.

El examen comprenderá dos apartados: el primero, de competencias básicas, que comprende las áreas comunicativa y matemática, el cual tendrá una ponderación en la calificación de 40%. El segundo será de conocimientos técnicos, y comprenderá las áreas teórico-normativa y de procedimientos electorales, el cual tendrá una ponderación en la calificación de 60%.

La estructura y el contenido del examen de conocimientos serán debidamente establecidos en la guía de estudios que se publicará en la página del Instituto.

Las y los aspirantes deberán identificarse con credencial para votar o identificación oficial con fotografía vigente. La aplicación y evaluación del examen de conocimientos estará a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).

La Comisión de Vinculación solicitará al Ceneval que la entrega de los resultados se realice con listas diferenciadas de mujeres y hombres, en orden de mayor a menor calificación. De tal manera que pasarán a la siguiente etapa 12 aspirantes mujeres y 12 aspirantes hombres que obtengan la mejor calificación, siempre y cuando ésta sea igual o mayor a seis. En caso de empate en la posición número 12, accederán las y los aspirantes que se encuentren en este supuesto.

Los resultados del examen de conocimientos se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día **13 de septiembre de 2018**, ordenados de mayor a menor calificación y diferenciando las listas de la forma siguiente:

- a) Nombre de las aspirantes que acceden a la siguiente etapa;
- b) Nombre de los aspirantes que acceden a la siguiente etapa; y
- c) Folios de las y los aspirantes que no pasan a la siguiente etapa.

A partir de dicha publicación, las y los aspirantes que no hubiesen accedido a la siguiente etapa, tendrán hasta el día **17 de septiembre de 2018** para en su caso, solicitar por escrito al correo electrónico revisiones.utvopl@ine.mx o ante la Unidad de Vinculación, la revisión del examen, misma que tendrá verificativo a partir del día **18 de septiembre de 2018**. La Unidad de Vinculación notificará a las y los solicitantes a través del correo electrónico que hayan proporcionado, la fecha, hora y lugar para la realización de la sesión de revisión. En todos los casos las sesiones

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la Ciudad de México.

Para la revisión del examen, se llevará a cabo una sesión por cada solicitante y a la misma acudirán personalmente la o el aspirante, un representante de Ceneval, y un representante de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación o la o el funcionario que ésta designe, quien levantará un acta de revisión de examen que deberá ser firmada por quienes intervengan en dicho acto. Para el desahogo de dicha sesión, la Institución evaluadora del examen proporcionará a la Secretaría Técnica todos los elementos necesarios para salvaguardar el derecho de audiencia y debido proceso del solicitante.

Si los resultados de la revisión realizada determinan que la o el sustentante obtuvo una calificación igual o superior a la posición 12, la Comisión de Vinculación ordenará su inclusión en la siguiente etapa, sin perjuicio de las y los aspirantes ya incluidos en las listas publicadas.

Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

4. Ensayo presencial. Las y los aspirantes que acrediten la etapa del examen de conocimientos, presentarán un ensayo de manera presencial, el **22 de septiembre de 2018**.

El Consejo General aprobará los lineamientos que establezcan lo siguiente:

- a) La institución de educación superior, de investigación o evaluación responsable de la aplicación y calificación de los ensayos presenciales;
- b) Criterios para la elaboración y dictamen de los ensayos presenciales;
- c) Requisitos formales para la aplicación del ensayo; y
- d) Fecha de entrega de resultados por parte de la institución educativa designada.

Los lineamientos aprobados serán notificados a las y los aspirantes, así como las sedes y horarios de aplicación, a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. La fecha para la elaboración del ensayo será inamovible, por lo que no podrá presentarse en otra fecha, bajo ningún motivo.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

A través de la elaboración y presentación del ensayo, las y los aspirantes serán evaluados sobre la habilidad que posean para definir, situar y delimitar un problema del ámbito electoral, a partir de la delimitación y contextualización de un problema central, de la identificación de los actores relevantes y los escenarios posibles, analizar los riesgos y oportunidades, para desarrollar propuesta operativas a efecto de gestionar o resolver los problemas identificados; no así sobre su postura u opinión particular con respecto al tema desarrollado. De esta manera, el ensayo permitirá calificar la capacidad de análisis, el desarrollo argumentativo, el planteamiento del problema y el desarrollo de escenarios y posibles soluciones, con el objeto de establecer una estrategia y una ruta crítica de acción con base en las atribuciones y competencias legales de los Organismos Públicos Locales.

La aplicación de los ensayos y su dictamen estará a cargo de la institución designada, que determinará quiénes son las y los aspirantes cuyo ensayo sea dictaminado como idóneo. Los ensayos serán evaluados por tres académicos que determine la propia institución y será idóneo el ensayo de la o el aspirante que obtenga al menos dos dictámenes favorables.

La institución designada entregará los tres dictámenes de cada uno de las y los aspirantes a la Comisión de Vinculación, a través de la Unidad de Vinculación a más tardar el día **11 de octubre de 2018**.

Los resultados del ensayo se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día **11 de octubre de 2018**, en listas diferenciadas, de acuerdo con lo siguiente:

- a) Nombre de las aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
- b) Nombre de los aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
- c) Folios de las y los aspirantes con dictamen de ensayo no idóneo.

Una vez que se tenga la lista de las y los aspirantes que hayan resultado con dictamen idóneo en el ensayo, la Comisión de Vinculación la hará de conocimiento público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y la notificará a las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, quienes podrán presentar por escrito, dentro de los cinco días hábiles siguientes, ante la misma Comisión, las observaciones y comentarios que consideren convenientes respecto de cada una de las y los aspirantes; el escrito deberá acompañarse de los elementos objetivos que sustenten o corroboren sus afirmaciones.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

A partir de dicha publicación, aquellos aspirantes cuyo ensayo haya sido dictaminado como no idóneo, tendrán derecho a solicitar por escrito, hasta el día **15 de octubre de 2018**, su revisión ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chihuahua o directamente ante la Unidad de Vinculación. La diligencia de revisión de ensayo deberá efectuarse a partir del día **16 de octubre de 2018**. En todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la Ciudad de México.

Si los resultados de la revisión realizada arrojan que el ensayo de la o el aspirante obtuvo un dictamen idóneo, la Comisión de Vinculación lo hará del conocimiento de las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para que en un término de dos días hábiles emitan las observaciones a que haya lugar en los términos precitados.

Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

Concluido el plazo de observaciones de las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, la Comisión de Vinculación hará del conocimiento público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, la relación de quienes, al no tener algún impedimento legal y habiendo aprobado las etapas anteriores, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista, conforme al calendario que apruebe la Comisión de Vinculación para tal efecto.

5. Valoración curricular y entrevista. Para los efectos de esta Convocatoria, la valoración curricular y la entrevista serán consideradas una misma etapa.

Las y los aspirantes cuyo ensayo resulte idóneo y se considere que no existen elementos objetivos aportados por las y los representantes de los partidos políticos o por Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para descalificarlos como aspirantes, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista.

El Consejo General, a propuesta de la Comisión de Vinculación, aprobará los criterios para realizar la valoración curricular y la entrevista, los que deberán considerar al menos lo siguiente:

- a) Propósito;
- b) Responsables de conducir las entrevistas;
- c) Procedimiento para la calificación;

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

- d) Las competencias a valorar;
- e) Ponderación que se utilizará para la calificación;
- f) Instrumento que se utilizará para la calificación.

Los criterios que apruebe el Consejo General serán notificados a las y los aspirantes a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx

Esta etapa estará a cargo de las y los Consejeros Electorales del Instituto, los cuales conformarán grupos de entrevistadores.

Al efecto, se procurará un equilibrio entre géneros en la conformación de las listas de las y los aspirantes que accedan a dicha etapa, para lo cual, la Comisión de Vinculación integrará las listas diferenciadas de hombres y mujeres cuyo ensayo presencial haya sido dictaminado como idóneo.

Las entrevistas se realizarán conforme al calendario y sedes que previamente apruebe la Comisión de Vinculación. La información sobre el calendario y la sede se publicará en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. Asimismo, se notificará a las y los aspirantes al correo electrónico proporcionado por los mismos, debiendo acusar de recibida dicha actuación. De la misma forma, se publicará en los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chihuahua.

Las entrevistas serán transmitidas en tiempo real en el portal del Instituto www.ine.mx, serán grabadas en video y estarán disponibles en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral.

En la etapa de valoración curricular y entrevista se identificará que el perfil de las y los aspirantes se apegue a los principios rectores de la función electoral y cuente con las competencias indispensables para determinar la idoneidad de las y los aspirantes para el desempeño del cargo.

La entrevista será presencial, se realizará en panel con al menos tres Consejeros o Consejeras Electorales, y deberá atender al proceso siguiente:

- a) **Antes de la entrevista.** Las y los aspirantes deberán presentarse por lo menos 30 minutos previos a la hora de inicio de la entrevista.
- b) **Durante la entrevista.** Se conforma de tres etapas: apertura, desarrollo y cierre; tendrá una duración de hasta 20 minutos.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

c) **Después de la entrevista.** Al finalizar el proceso de entrevista, cada Consejera o Consejero Electoral deberá asentar el valor cuantificable de cada uno de los rubros que conforman la cédula de valoración curricular y entrevista.

Excepcionalmente, previa causa justificada, las entrevistas podrán llevarse a cabo de manera virtual mediante el uso de tecnologías de la información.

Las y los Consejeros Electorales del Consejo General podrán utilizar cualquier documento, insumo o herramienta que coadyuve a la realización de la entrevista.

En atención al principio de máxima publicidad, las cédulas de los aspirantes se harán públicas en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

OCTAVA. Integración de las listas de candidatas y candidatos

Conforme a lo previsto en los artículos 100, párrafos 1 y 3 y 101, párrafos 1, inciso f), 3 y 4 de la Ley General y 24, párrafo 1, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, la Comisión de Vinculación presentará al Consejo General una lista con la totalidad de los nombres de las y los candidatos a ocupar el cargo.

La propuesta de la o el candidato deberá contener un dictamen debidamente fundado y motivado, que incluya todas las etapas del proceso de selección, además de los elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad y capacidad para el cargo de la o el aspirante.

Una vez elaborada la propuesta de la o el candidato, respaldada con el dictamen respectivo, la Comisión de Vinculación deberá someterla a la consideración del Consejo General con una anticipación no menor a setenta y dos horas previas a la sesión que corresponda.

NOVENA. Designaciones

El Consejo General designará a más tardar el día **1 de noviembre de 2018**, por mayoría de ocho votos, a las Consejeras o Consejeros Electorales que iniciarán el encargo de siete años en el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, especificando, en su caso, el periodo o la conclusión del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, párrafo 1, incisos a), g)

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

y jj), de la Ley General, y del Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

La fecha mencionada en el párrafo anterior será tomada como base para determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Base Tercera, párrafos 3 y 4 de la presente Convocatoria.

Con base en los artículos 24, párrafo 9, y 27 párrafo 4 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, en la designación de las o los Consejeros Electorales correspondientes, se procurará observar el principio de paridad de género considerando la integración del órgano superior de dirección del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.

El Consejo General deberá ordenar la publicación del acuerdo de designación en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del estado de Chihuahua, así como comunicar a las autoridades locales la designación. Asimismo, ordenará a la Secretaría Ejecutiva notificar el acuerdo respectivo a la o el ciudadano designado.

La ciudadana o el ciudadano que haya sido designado como Consejera o Consejero Electoral, deberá acreditar o manifestar bajo protesta de decir verdad, dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación del Acuerdo de designación, que no desempeña ningún empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos relacionados con actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia no remunerados.

La lista que contenga el nombre de las Consejeras o Consejeros Electorales designados será publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

DÉCIMA. Nombramiento y toma de protesta

Las o los ciudadanos que hayan sido designados recibirán el nombramiento que lo acredita como Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua; mismo que contendrá, entre otras cosas el nombre y apellidos, cargo, periodo y fecha de expedición.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados rendirán protesta en la fecha que determine el acuerdo de designación que apruebe el Consejo General. Se rendirá protesta en la sede del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua y deberá incluirse el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución Política del estado y las leyes que de ellas emanen, así como el apego a los principios rectores de la función electoral.

Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados no podrán ser reelectos, acorde a lo establecido en el artículo 116, base IV, inciso c), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DÉCIMA PRIMERA. Transparencia

El resultado de cada una de las etapas deberá hacerse público a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y por los demás medios que determine la Comisión de Vinculación, en los términos establecidos para cada etapa en la presente Convocatoria.

La información y documentación que integre los expedientes individuales de las y los aspirantes será confidencial en términos de lo establecido en el artículo 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que no podrá tener otro fin que el previsto en el proceso objeto de la presente Convocatoria, ni ser utilizada o difundida salvo que medie el consentimiento expreso del titular conforme al Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En atención al principio de máxima publicidad, el Instituto realizará la publicación de la información más relevante de cada aspirante, utilizando para este propósito la que se encuentra contenida en el resumen curricular, entregada por cada aspirante al momento de su registro.

DÉCIMA SEGUNDA. Casos no previstos

Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la Comisión de Vinculación, con base en lo dispuesto en el Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Para mayores informes favor de comunicarse a los teléfonos:

Junta Local Ejecutiva	(01-614) 437-05-90 / (01-614) 437-05-91 Ext. 102 y 105		
Junta Distrital 01	(01-656) 681-70-96 / (01-656) 690-76-67	Junta Distrital 02	(01 656) 210-19-00 / (01 656) 210-19-01
Junta Distrital 03	(01-656) 633-60-92 / (01-656) 617-03-90	Junta Distrital 04	(01-656) 637-91-35 / (01-656) 637-91-36
Junta Distrital 05	(01-639) 474-56-03 / (01-639) 474-56-06	Junta Distrital 06	(01-614) 413-54-12 / (01-614) 413-01-18
Junta Distrital 07	(01-625) 581-02-10 / (01-614) 581-02-18	Junta Distrital 08	(01-614) 417-07-94 / (01-614) 417-06-94
Junta Distrital 09	(01-627) 523-25-85 / (01-627) 523-26-91		

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero y 41, Base V, apartado C, último párrafo; 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo 1, inciso d); 4, párrafo 2; 6, párrafo 2; 29, párrafo 1; 30, párrafo 2; 31, párrafos 1 y 4; 32, párrafo 2, inciso b); 39, párrafo 2; 42, párrafos 5, 6, 8 y 10; 43; 44, párrafo 1, incisos a), g) y jj); 45, párrafo 1, inciso a); 46, párrafo 1, inciso k); 60 inciso e); 99, párrafo 1; 100 y 101, de la Ley General; 73, inciso i) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

CONVOCA:

A las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 100, párrafos 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante Ley General); y artículo 9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, y deseen participar en el proceso de selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral de Coahuila, a solicitar su registro y presentar su documentación de aspirante conforme a las siguientes:

BASES:

PRIMERA. Aspectos generales

Las y los aspirantes interesados en participar en el proceso de selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral de Coahuila, deberán llenar los formatos que para tal efecto se pondrán a disposición en el portal del Instituto www.ine.mx, desde el **23 de julio al 17 de agosto 2018**.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Una vez requisitados los formatos, deberán imprimirse, **verificar que la información capturada se encuentre completa al imprimir el formato** y firmarse. Los formatos tendrán como único propósito recabar la información de las y los aspirantes, por lo que en ningún caso se podrán considerar como una constancia de registro al proceso de selección y designación.

Tanto los formatos como la documentación solicitada en la presente Convocatoria se recibirán del **13 al 17 de agosto de 2018**, en las oficinas de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas o en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).

Quien así lo requiera podrá asistir a las oficinas antes mencionadas para ser auxiliados en el llenado de los formatos.

La recepción de solicitudes debidamente requisitadas se realizará ante los siguientes órganos del Instituto Nacional Electoral:

Secretaría Ejecutiva

Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio A, Planta Alta, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México, C.P. 14610.

Junta Local Ejecutiva

Monte Blanco No. 160, esquina con Prolongación Abasolo, Colonia Alpes, C. P. 25270.

Junta Distrital 01

Hacienda No. 408-D 3er Piso, Colonia Burócratas, Piedras Negras, Coahuila, C. P. 26020.

Junta Distrital 02

Avenida Hidalgo No. 107 Ote., esquina. con Viesca, Zona Centro, San Pedro, Coahuila, C. P. 27800.

Junta Distrital 03

Del Paso No. 100, Colonia Fraccionamiento Carranza, Monclova, Coahuila, C. P. 25760.

Junta Distrital 04

Mariano Abasolo Norte No. 276, Colonia Centro, Saltillo, Coahuila, C. P. 25000.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Junta Distrital 05

Donato Guerra No. 101 Sur, esquina. con Matamoros, Colonia Centro, Torreón, Coahuila, C. P. 27000.

Junta Distrital 06

Boulevard Pedro Rodríguez Triana No. 747
Locales 33, 34, 35, 36 y 38, Colonia Parque Industrial Oriente, Torreón, Coahuila, C. P. 27278.

Junta Distrital 07

Allende No. 701, Colonia Centro, Saltillo, Coahuila, C. P. 25000.

Las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 100, párrafo 2 de la Ley General y en el artículo 9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, podrán inscribirse como aspirantes al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral de Coahuila.

De conformidad con el artículo 13, párrafo 4, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, las y los aspirantes que participen en el proceso de selección y designación en todo momento deberán mantener el cumplimiento de requisitos; de no ser así, la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante Comisión de Vinculación), descartará a la o el aspirante que se encuentre en este supuesto en cualquier etapa del proceso.

SEGUNDA. Cargo y periodo a designar.

El proceso de selección tiene como propósito designar a tres Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto Electoral de Coahuila, que durarán en su encargo siete años, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 101, párrafo 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

TERCERA. Requisitos.

Las y los interesados en ocupar el cargo referido en la Base Segunda deberán cumplir con los siguientes requisitos:

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

1. Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
2. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente;
3. Tener más de 30 años cumplidos al día de la designación;
4. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel licenciatura;
5. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
6. Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
7. No haber sido registrado como candidata o candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación;
8. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación;
9. No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;
10. No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación como de las entidades federativas, ni subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno. No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni Gobernadora o Gobernador, ni Secretaria o Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser Presidenta o Presidente Municipal, Síndico (a) o Regidor (a) o titular de dependencia de los Ayuntamientos; y
11. No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral de Coahuila o de cualquier otra entidad federativa.

CUARTA. Documentación a entregar.

Las y los interesados deberán presentar la siguiente documentación:

1. Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto;
2. Copia certificada del acta de nacimiento;

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

3. En caso de no ser originario de la entidad federativa correspondiente, deberá presentar una constancia que acredite una residencia efectiva en la entidad de por lo menos cinco años anteriores a la fecha de designación establecida en la Convocatoria; dicha constancia deberá ser expedida por autoridad competente. En su caso, el documento con el que compruebe ubicarse en una excepción por razón de ausencia del país por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
4. Original y copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, para su certificación;
5. Dos fotografías recientes tamaño infantil a color;
6. Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la solicitud con una antigüedad máxima de tres meses;
7. Copia certificada del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha de expedición mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la Convocatoria para la designación;
8. Currículum vitae firmado por la o el aspirante a través del formato que para tal efecto estará disponible en el portal del Instituto, el cual deberá contener, entre otros datos: nombre y apellidos completos, domicilio, teléfonos y correo electrónico, estudios realizados, trayectoria laboral, académica, política, docente y profesional, publicaciones, actividad empresarial, cargos de elección popular, organizaciones de cualquier tipo a las que pertenezca y el carácter de su participación, así como el empleo, cargo o comisión que, en su caso, desempeñe al momento del registro;
9. Resumen curricular con una extensión máxima de una cuartilla con letra Arial 12, para su eventual publicación, por lo que no deberá contener datos personales privados. Para lo anterior, deberá emplear el formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto; y
10. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa (empleando el formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto), en la que se manifieste:
 - a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
 - b) No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
 - c) No haber sido registrado como candidata o candidato a cargo alguno de elección popular durante los cuatro años anteriores a la designación;
 - d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación;

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

- e) No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;
- f) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno federal o de las entidades federativas, ni subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno;
- g) No ser jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni gobernadora o gobernador, ni secretaria o secretario de gobierno o su equivalente a nivel local;
- h) No ser jefe o jefa delegacional, presidenta o presidente municipal, síndica o síndico o regidora o regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos;
- i) No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral de Coahuila o de cualquier otra entidad federativa;
- j) La aceptación de dar por concluido todo empleo, cargo o comisión en caso de ser designado como Consejera o Consejero Presidente;
- k) Toda la información que, con motivo del proceso de selección a que se refiere la Convocatoria, ha proporcionado o llegue a proporcionar es veraz y toda la documentación que ha entregado o llegue a entregar es auténtica;
- l) La aceptación de sujetarse a la Convocatoria y a las reglas establecidas en el presente proceso de selección; y
- m) Consentimiento para que sus datos personales sean utilizados únicamente para los fines de la convocatoria.

Los formatos para la presentación de los requisitos establecidos en los párrafos 1, 8, 9 y 10, estarán disponibles en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en las oficinas del Instituto Nacional Electoral.

Si fuera el caso de que las y los interesados, con motivo de alguna convocatoria anterior hubieran presentado al Instituto Nacional Electoral copia certificada del acta de nacimiento; del título o cédula profesional de nivel licenciatura y los mismos obraran en los archivos del Instituto, deberán hacerlo del conocimiento en su solicitud de registro de la presente Convocatoria, los cuales se ubicarán en una situación de excepción para exhibirlos, una vez que la autoridad nacional electoral verifique su resguardo documental.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

De ser el caso que la solicitud de la o el aspirante se realice el día 17 de agosto de 2018, la Unidad Técnica contará con el término de veinticuatro horas para verificar en sus archivos la existencia de dichos documentos, y en caso de que no cuente con ellos, requerirá a la o el aspirante para que dentro del término de cuarenta y ocho horas los remita digitalizados a través de correo electrónico y de igual forma en forma física, a través de la Junta Local o Distrital de su entidad federativa.

QUINTA. Plazos y horarios para el registro

Las y los aspirantes deberán presentar los formatos referidos en las Bases Primera y Cuarta para solicitar su registro del **13 al 17 de agosto de 2018**, en la Secretaría Ejecutiva, en la Junta Local Ejecutiva o en las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral correspondientes al estado de Coahuila, en los domicilios citados en la Base Primera de la presente Convocatoria, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).

SEXTA. Notificaciones.

Todas las notificaciones se harán mediante el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, salvo aquéllas que deban realizarse de manera personal a las y los aspirantes, mismas que se harán mediante el correo electrónico que hayan registrado y que deberán ser acusadas de recibido por los aspirantes de forma inmediata a su recepción, en el entendido de que quienes no lo hagan dentro de las veinticuatro horas posteriores a su envío, se darán por debidamente notificados.

Las ciudadanas o ciudadanos designados por el Consejo General serán notificados en los términos del artículo 24, párrafo 7, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

SÉPTIMA. Etapas del proceso de selección y designación.

El proceso de selección de las Consejeras o Consejeros Electorales del órgano superior de dirección del Instituto Electoral de Coahuila se desarrollará de conformidad con las siguientes etapas:

1. Registro de aspirantes. Las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en el estado de Coahuila, así como la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral recibirán, en las fechas establecidas en la Base Quinta

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

de la presente Convocatoria, las solicitudes y la documentación que presenten las y los aspirantes o por persona autorizada por escrito, siempre y cuando en la solicitud aparezca la firma autógrafa de dichos aspirantes para ocupar el cargo convocado. Cada órgano receptor será el responsable de concentrar las solicitudes y documentación correspondiente para la integración de los expedientes.

En las sedes de las Juntas Local y Distritales del estado de Coahuila, así como de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, se proporcionará el apoyo necesario para llevar a cabo el registro en el sistema habilitado para la presente Convocatoria.

Al momento de presentar la solicitud de registro y entregar la documentación correspondiente, las y los aspirantes recibirán un acuse con un folio asignado y la descripción de la información y documentación entregada al Instituto, el cual deberán firmar de conformidad. El mencionado comprobante tendrá como único propósito acusar de recibida la documentación ahí referida, por lo que en ningún caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos de esta Convocatoria.

La Junta Local Ejecutiva será la responsable de concentrar los expedientes de las y los aspirantes que se presenten ante la misma y ante las Juntas Distritales Ejecutivas, elaborando una lista de aquéllos que presentaron su solicitud, señalando las inconsistencias u omisiones en los documentos presentados, las cuales serán puestas a consideración de la Comisión de Vinculación.

A más tardar el **20 de agosto de 2018**, la Junta Local Ejecutiva remitirá los expedientes a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante Unidad de Vinculación) para que ésta los entregue tanto en físico como en versión electrónica al Presidente de la Comisión de Vinculación. Al resto de las y los Consejeros del Consejo General se les entregará una copia en medio electrónico.

Los expedientes originales estarán bajo resguardo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación, quien los pondrá a disposición para consulta de las y los integrantes del Consejo General y de la propia Comisión.

La Secretaría Ejecutiva y las Juntas Local y Distritales no podrán descartar o rechazar solicitud alguna que se les presente. En caso de que algún aspirante no entregue la totalidad de la documentación, podrá subsanar la omisión siempre y

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

cuando se encuentre dentro del periodo de registro establecido en la presente Convocatoria o a solicitud expresa de la Unidad de Vinculación.

2. Verificación de los requisitos legales. La Comisión de Vinculación, con el apoyo de los grupos de trabajo que en su caso se conformen, verificará el cumplimiento de los requisitos legales, y aprobará, a más tardar el **28 de agosto de 2018**, el Acuerdo que contenga la relación con los nombres y apellidos de las y los aspirantes que cumplen con todos los requisitos y ordenará su publicación, agregando el resumen curricular de cada uno de los aspirantes.

En el mismo Acuerdo, la Comisión de Vinculación aprobará la sede y horario en que se aplicará el examen de conocimientos.

La Unidad de Vinculación publicará la guía de estudio y las condiciones del examen de conocimientos, en la misma fecha en la que se habiliten los formatos de registro de aspirantes en la página del Instituto; es decir, el **23 de julio**.

La información prevista en los párrafos anteriores deberá ser publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas en el estado de Coahuila.

3. Examen de conocimientos. Las y los aspirantes que hayan cumplido con todos los requisitos legales serán convocados a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, para presentar el examen de conocimientos, mismo que tendrá verificativo el día **1 de septiembre de 2018**, en la sede previamente definida y publicada en el portal del Instituto por la Unidad de Vinculación. La fecha para la presentación del examen será inamovible, por lo que no podrá aplicarse en otra diversa, por ninguna causa.

El examen comprenderá dos apartados: el primero, de competencias básicas, que comprende las áreas comunicativa y matemática, el cual tendrá una ponderación en la calificación de 40%. El segundo será de conocimientos técnicos, y comprenderá las áreas teórico-normativa y de procedimientos electorales, el cual tendrá una ponderación en la calificación de 60%.

La estructura y el contenido del examen de conocimientos serán debidamente establecidos en la guía de estudios que se publicará en la página del Instituto.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Las y los aspirantes deberán identificarse con credencial para votar o identificación oficial con fotografía vigente. La aplicación y evaluación del examen de conocimientos estará a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).

La Comisión de Vinculación solicitará al Ceneval que la entrega de los resultados se realice con listas diferenciadas de mujeres y hombres, en orden de mayor a menor calificación. De tal manera que pasarán a la siguiente etapa 12 aspirantes mujeres y 12 aspirantes hombres que obtengan la mejor calificación, siempre y cuando ésta sea igual o mayor a seis. En caso de empate en la posición número 12, accederán las y los aspirantes que se encuentren en este supuesto.

Los resultados del examen de conocimientos se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día **13 de septiembre de 2018**, ordenados de mayor a menor calificación y diferenciando las listas de la forma siguiente:

- a) Nombre de las aspirantes que acceden a la siguiente etapa;
- b) Nombre de los aspirantes que acceden a la siguiente etapa; y
- c) Folios de las y los aspirantes que no pasan a la siguiente etapa.

A partir de dicha publicación, las y los aspirantes que no hubiesen accedido a la siguiente etapa, tendrán hasta el día **17 de septiembre de 2018** para en su caso, solicitar por escrito al correo electrónico revisiones.utvopl@ine.mx o ante la Unidad de Vinculación, la revisión del examen, misma que tendrá verificativo a partir del día **18 de septiembre de 2018**. La Unidad de Vinculación notificará a las y los solicitantes a través del correo electrónico que hayan proporcionado, la fecha, hora y lugar para la realización de la sesión de revisión. En todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la Ciudad de México.

Para la revisión del examen, se llevará a cabo una sesión por cada solicitante y a la misma acudirán personalmente la o el aspirante, un representante de Ceneval, y un representante de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación o la o el funcionario que ésta designe, quien levantará un acta de revisión de examen que deberá ser firmada por quienes intervengan en dicho acto. Para el desahogo de dicha sesión, la Institución evaluadora del examen proporcionará a la Secretaría Técnica todos los elementos necesarios para salvaguardar el derecho de audiencia y debido proceso del solicitante.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Si los resultados de la revisión realizada determinan que la o el sustentante obtuvo una calificación igual o superior a la posición 12, la Comisión de Vinculación ordenará su inclusión en la siguiente etapa, sin perjuicio de las y los aspirantes ya incluidos en las listas publicadas.

Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

4. Ensayo presencial. Las y los aspirantes que acrediten la etapa del examen de conocimientos, presentarán un ensayo de manera presencial, el **22 de septiembre de 2018**.

El Consejo General aprobará los lineamientos que establezcan lo siguiente:

- a) La institución de educación superior, de investigación o evaluación responsable de la aplicación y calificación de los ensayos presenciales;
- b) Criterios para la elaboración y dictamen de los ensayos presenciales;
- c) Requisitos formales para la aplicación del ensayo; y
- d) Fecha de entrega de resultados por parte de la institución educativa designada.

Los lineamientos aprobados serán notificados a las y los aspirantes, así como las sedes y horarios de aplicación, a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. La fecha para la elaboración del ensayo será inamovible, por lo que no podrá presentarse en otra fecha, bajo ningún motivo.

A través de la elaboración y presentación del ensayo, las y los aspirantes serán evaluados sobre la habilidad que posean para definir, situar y delimitar un problema del ámbito electoral, a partir de la delimitación y contextualización de un problema central, de la identificación de los actores relevantes y los escenarios posibles, analizar los riesgos y oportunidades, para desarrollar propuesta operativas a efecto de gestionar o resolver los problemas identificados; no así sobre su postura u opinión particular con respecto al tema desarrollado. De esta manera, el ensayo permitirá calificar la capacidad de análisis, el desarrollo argumentativo, el planteamiento del problema y el desarrollo de escenarios y posibles soluciones, con el objeto de establecer una estrategia y una ruta crítica de acción con base en las atribuciones y competencias legales de los Organismos Públicos Locales.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

La aplicación de los ensayos y su dictamen estará a cargo de la institución designada, que determinará quiénes son las y los aspirantes cuyo ensayo sea dictaminado como idóneo. Los ensayos serán evaluados por tres académicos que determine la propia institución y será idóneo el ensayo de la o el aspirante que obtenga al menos dos dictámenes favorables.

La institución designada entregará los tres dictámenes de cada uno de las y los aspirantes a la Comisión de Vinculación, a través de la Unidad de Vinculación a más tardar el día **11 de octubre de 2018**.

Los resultados del ensayo se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día **11 de octubre de 2018**, en listas diferenciadas, de acuerdo con lo siguiente:

- a) Nombre de las aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
- b) Nombre de los aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
- c) Folios de las y los aspirantes con dictamen de ensayo no idóneo.

Una vez que se tenga la lista de las y los aspirantes que hayan resultado con dictamen idóneo en el ensayo, la Comisión de Vinculación la hará de conocimiento público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y la notificará a las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, quienes podrán presentar por escrito, dentro de los cinco días hábiles siguientes, ante la misma Comisión, las observaciones y comentarios que consideren convenientes respecto de cada una de las y los aspirantes; el escrito deberá acompañarse de los elementos objetivos que sustenten o corroboren sus afirmaciones.

A partir de dicha publicación, aquellos aspirantes cuyo ensayo haya sido dictaminado como no idóneo, tendrán derecho a solicitar por escrito, hasta el día **15 de octubre de 2018**, su revisión ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Coahuila o directamente ante la Unidad de Vinculación. La diligencia de revisión de ensayo deberá efectuarse a partir del día **16 de octubre de 2018**. En todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la Ciudad de México.

Si los resultados de la revisión realizada arrojan que el ensayo de la o el aspirante obtuvo un dictamen idóneo, la Comisión de Vinculación lo hará del conocimiento de las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

del Poder Legislativo del Consejo General, para que en un término de dos días hábiles emitan las observaciones a que haya lugar en los términos precitados.

Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

Concluido el plazo de observaciones de las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, la Comisión de Vinculación hará del conocimiento público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, la relación de quienes, al no tener algún impedimento legal y habiendo aprobado las etapas anteriores, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista, conforme al calendario que apruebe la Comisión de Vinculación para tal efecto.

5. Valoración curricular y entrevista. Para los efectos de esta Convocatoria, la valoración curricular y la entrevista serán consideradas una misma etapa.

Las y los aspirantes cuyo ensayo resulte idóneo y se considere que no existen elementos objetivos aportados por las y los representantes de los partidos políticos o por Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para descalificarlos como aspirantes, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista.

El Consejo General, a propuesta de la Comisión de Vinculación, aprobará los criterios para realizar la valoración curricular y la entrevista, los que deberán considerar al menos lo siguiente:

- a) Propósito;
- b) Responsables de conducir las entrevistas;
- c) Procedimiento para la calificación;
- d) Las competencias a valorar;
- e) Ponderación que se utilizará para la calificación;
- f) Instrumento que se utilizará para la calificación.

Los criterios que apruebe el Consejo General serán notificados a las y los aspirantes a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx

Esta etapa estará a cargo de las y los Consejeros Electorales del Instituto, los cuales conformarán grupos de entrevistadores.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Al efecto, se procurará un equilibrio entre géneros en la conformación de las listas de las y los aspirantes que accedan a dicha etapa, para lo cual, la Comisión de Vinculación integrará las listas diferenciadas de hombres y mujeres cuyo ensayo presencial haya sido dictaminado como idóneo.

Las entrevistas se realizarán conforme al calendario y sedes que previamente apruebe la Comisión de Vinculación. La información sobre el calendario y la sede se publicará en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. Asimismo, se notificará a las y los aspirantes al correo electrónico proporcionado por los mismos, debiendo acusar de recibida dicha actuación. De la misma forma, se publicará en los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en el estado de Coahuila.

Las entrevistas serán transmitidas en tiempo real en el portal del Instituto www.ine.mx, serán grabadas en video y estarán disponibles en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral.

En la etapa de valoración curricular y entrevista se identificará que el perfil de las y los aspirantes se apegue a los principios rectores de la función electoral y cuente con las competencias indispensables para determinar la idoneidad de las y los aspirantes para el desempeño del cargo.

La entrevista será presencial, se realizará en panel con al menos tres Consejeros o Consejeras Electorales, y deberá atender al proceso siguiente:

- a) **Antes de la entrevista.** Las y los aspirantes deberán presentarse por lo menos 30 minutos previos a la hora de inicio de la entrevista.
- b) **Durante la entrevista.** Se conforma de tres etapas: apertura, desarrollo y cierre; tendrá una duración de hasta 20 minutos.
- c) **Después de la entrevista.** Al finalizar el proceso de entrevista, cada Consejera o Consejero Electoral deberá asentar el valor cuantificable de cada uno de los rubros que conforman la cédula de valoración curricular y entrevista.

Excepcionalmente, previa causa justificada, las entrevistas podrán llevarse a cabo de manera virtual mediante el uso de tecnologías de la información.

Las y los Consejeros Electorales del Consejo General podrán utilizar cualquier documento, insumo o herramienta que coadyuve a la realización de la entrevista.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

En atención al principio de máxima publicidad, las cédulas de los aspirantes se harán públicas en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

OCTAVA. Integración de las listas de candidatas y candidatos

Conforme a lo previsto en los artículos 100, párrafos 1 y 3 y 101, párrafos 1, inciso f), 3 y 4 de la Ley General y 24, párrafo 1, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, la Comisión de Vinculación presentará al Consejo General una lista con la totalidad de los nombres de las y los candidatos a ocupar el cargo.

La propuesta de la o el candidato deberá contener un dictamen debidamente fundado y motivado, que incluya todas las etapas del proceso de selección, además de los elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad y capacidad para el cargo de la o el aspirante.

Una vez elaborada la propuesta de la o el candidato, respaldada con el dictamen respectivo, la Comisión de Vinculación deberá someterla a la consideración del Consejo General con una anticipación no menor a setenta y dos horas previas a la sesión que corresponda.

NOVENA. Designaciones

El Consejo General designará a más tardar el día **1 de noviembre de 2018**, por mayoría de ocho votos, a las Consejeras o Consejeros Electorales que iniciarán el encargo de siete años en el Instituto Electoral de Coahuila, especificando, en su caso, el periodo o la conclusión del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, párrafo 1, incisos a), g) y jj), de la Ley General, y del Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

La fecha mencionada en el párrafo anterior será tomada como base para determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Base Tercera, párrafos 3 y 4 de la presente Convocatoria.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Con base en los artículos 24, párrafo 9, y 27 párrafo 4 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, en la designación de las o los Consejeros Electorales correspondientes, se procurará observar el principio de paridad de género considerando la integración del órgano superior de dirección del Instituto Electoral de Coahuila.

El Consejo General deberá ordenar la publicación del acuerdo de designación en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del estado de Coahuila, así como comunicar a las autoridades locales la designación. Asimismo, ordenará a la Secretaría Ejecutiva notificar el acuerdo respectivo a la o el ciudadano designado.

La ciudadana o el ciudadano que haya sido designado como Consejera o Consejero Electoral, deberá acreditar o manifestar bajo protesta de decir verdad, dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación del Acuerdo de designación, que no desempeña ningún empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos relacionados con actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia no remunerados.

La lista que contenga el nombre de las Consejeras o Consejeros Electorales designados será publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

DÉCIMA. Nombramiento y toma de protesta

Las o los ciudadanos que hayan sido designados recibirán el nombramiento que lo acredita como Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto Electoral de Coahuila; mismo que contendrá, entre otras cosas el nombre y apellidos, cargo, periodo y fecha de expedición.

Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados rendirán protesta en la fecha que determine el acuerdo de designación que apruebe el Consejo General. Se rendirá protesta en la sede del Instituto Electoral de Coahuila y deberá incluirse el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución Política del estado y las leyes que de ellas emanen, así como el apego a los principios rectores de la función electoral.

Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados no podrán ser reelectos, acorde a lo establecido en el artículo 116, base IV, inciso c), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

DÉCIMA PRIMERA. Transparencia

El resultado de cada una de las etapas deberá hacerse público a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y por los demás medios que determine la Comisión de Vinculación, en los términos establecidos para cada etapa en la presente Convocatoria.

La información y documentación que integre los expedientes individuales de las y los aspirantes será confidencial en términos de lo establecido en el artículo 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que no podrá tener otro fin que el previsto en el proceso objeto de la presente Convocatoria, ni ser utilizada o difundida salvo que medie el consentimiento expreso del titular conforme al Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En atención al principio de máxima publicidad, el Instituto realizará la publicación de la información más relevante de cada aspirante, utilizando para este propósito la que se encuentra contenida en el resumen curricular, entregada por cada aspirante al momento de su registro.

DÉCIMA SEGUNDA. Casos no previstos

Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la Comisión de Vinculación, con base en lo dispuesto en el Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

Para mayores informes favor de comunicarse a los teléfonos:

Junta Local Ejecutiva (01-844) 415-83-00

Junta Distrital 01 (01-878) 782-53-98 Ext. 105

Junta Distrital 03 (01-866) 636-01-52 Ext. 2

Junta Distrital 05 (01-871) 717-23-82 Ext. 102

Junta Distrital 07 (01-844) 415-15-76 Ext. 103

Junta Distrital 02 (01-872) 772-19-53 Ext. 104

Junta Distrital 04 (01-844) 410-00-09 Ext. 101

Junta Distrital 06 (01-871) 718-53-94 Ext. 109

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero y 41, Base V, apartado C, último párrafo; 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo 1, inciso d); 4, párrafo 2; 6, párrafo 2; 29, párrafo 1; 30, párrafo 2; 31, párrafos 1 y 4; 32, párrafo 2, inciso b); 39, párrafo 2; 42, párrafos 5, 6, 8 y 10; 43; 44, párrafo 1, incisos a), g) y jj); 45, párrafo 1, inciso a); 46, párrafo 1, inciso k); 60 inciso e); 99, párrafo 1; 100 y 101, de la Ley General; 73, inciso i) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

CONVOCA:

A las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 100, párrafos 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante Ley General); y artículo 9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, y deseen participar en el proceso de selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango, a solicitar su registro y presentar su documentación de aspirante conforme a las siguientes:

BASES:

PRIMERA. Aspectos generales

Las y los aspirantes interesados en participar en el proceso de selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango, deberán llenar los formatos que para tal efecto se pondrán a disposición en el portal del Instituto www.ine.mx, desde el **23 de julio al 17 de agosto 2018**.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Una vez requisitados los formatos, deberán imprimirse, **verificar que la información capturada se encuentre completa al imprimir el formato** y firmarse. Los formatos tendrán como único propósito recabar la información de las y los aspirantes, por lo que en ningún caso se podrán considerar como una constancia de registro al proceso de selección y designación.

Tanto los formatos como la documentación solicitada en la presente Convocatoria se recibirán del **13 al 17 de agosto de 2018**, en las oficinas de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas o en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).

Quien así lo requiera podrá asistir a las oficinas antes mencionadas para ser auxiliados en el llenado de los formatos.

La recepción de solicitudes debidamente requisitadas se realizará ante los siguientes órganos del Instituto Nacional Electoral:

Secretaría Ejecutiva

Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio A, Planta Alta, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México, C.P. 14610.

Junta Local Ejecutiva

Avenida 5 de Febrero No. 1001-A Pte., Zona Centro, Durango, Durango, C. P. 34000.

Junta Distrital 01

Boulevard Domingo Arrieta No. 2125, Colonia 8 de Septiembre, Durango, Durango, C. P. 34196.

Junta Distrital 02

Avenida Allende No. 610 Nte., Zona Centro, Gómez Palacio, Durango, C. P. 35000.

Junta Distrital 03

Calzada José Ramón Valdéz No. 407 Pte., Guadalupe Victoria, Durango, C. P. 34700.

Junta Distrital 04

Dr. Atl No. 60, esquina con Ramírez, Colonia Centro, Durango, Durango, C. P. 34000.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 100, párrafo 2 de la Ley General y en el artículo 9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, podrán inscribirse como aspirantes al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango.

De conformidad con el artículo 13, párrafo 4, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, las y los aspirantes que participen en el proceso de selección y designación en todo momento deberán mantener el cumplimiento de requisitos; de no ser así, la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante Comisión de Vinculación), descartará a la o el aspirante que se encuentre en este supuesto en cualquier etapa del proceso.

SEGUNDA. Cargo y periodo a designar.

El proceso de selección tiene como propósito designar a tres Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango, que durarán en su encargo siete años, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 101, párrafo 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

TERCERA. Requisitos.

Las y los interesados en ocupar el cargo referido en la Base Segunda deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
2. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente;
3. Tener más de 30 años cumplidos al día de la designación;
4. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel licenciatura;
5. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

6. Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
7. No haber sido registrado como candidata o candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación;
8. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación;
9. No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;
10. No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación como de las entidades federativas, ni subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno. No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni Gobernadora o Gobernador, ni Secretaria o Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser Presidenta o Presidente Municipal, Síndico (a) o Regidor (a) o titular de dependencia de los Ayuntamientos; y
11. No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango o de cualquier otra entidad federativa.

CUARTA. Documentación a entregar.

Las y los interesados deberán presentar la siguiente documentación:

1. Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto;
2. Copia certificada del acta de nacimiento;
3. En caso de no ser originario de la entidad federativa correspondiente, deberá presentar una constancia que acredite una residencia efectiva en la entidad de por lo menos cinco años anteriores a la fecha de designación establecida en la Convocatoria; dicha constancia deberá ser expedida por autoridad competente. En su caso, el documento con el que compruebe ubicarse en una excepción por razón de ausencia del país por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
4. Original y copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, para su certificación;

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

5. Dos fotografías recientes tamaño infantil a color;
6. Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la solicitud con una antigüedad máxima de tres meses;
7. Copia certificada del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha de expedición mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la Convocatoria para la designación;
8. Currículum vitae firmado por la o el aspirante a través del formato que para tal efecto estará disponible en el portal del Instituto, el cual deberá contener, entre otros datos: nombre y apellidos completos, domicilio, teléfonos y correo electrónico, estudios realizados, trayectoria laboral, académica, política, docente y profesional, publicaciones, actividad empresarial, cargos de elección popular, organizaciones de cualquier tipo a las que pertenezca y el carácter de su participación, así como el empleo, cargo o comisión que, en su caso, desempeñe al momento del registro;
9. Resumen curricular con una extensión máxima de una cuartilla con letra Arial 12, para su eventual publicación, por lo que no deberá contener datos personales privados. Para lo anterior, deberá emplear el formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto; y
10. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa (empleando el formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto), en la que se manifieste:
 - a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
 - b) No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
 - c) No haber sido registrado como candidata o candidato a cargo alguno de elección popular durante los cuatro años anteriores a la designación;
 - d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación;
 - e) No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;
 - f) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno federal o de las entidades federativas, ni subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno;

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

- g) No ser jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni gobernadora o gobernador, ni secretaria o secretario de gobierno o su equivalente a nivel local;
- h) No ser jefe o jefa delegacional, presidenta o presidente municipal, síndica o síndico o regidora o regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos;
- i) No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango o de cualquier otra entidad federativa;
- j) La aceptación de dar por concluido todo empleo, cargo o comisión en caso de ser designado como Consejera o Consejero Presidente;
- k) Toda la información que, con motivo del proceso de selección a que se refiere la Convocatoria, ha proporcionado o llegue a proporcionar es veraz y toda la documentación que ha entregado o llegue a entregar es auténtica;
- l) La aceptación de sujetarse a la Convocatoria y a las reglas establecidas en el presente proceso de selección; y
- m) Consentimiento para que sus datos personales sean utilizados únicamente para los fines de la convocatoria.

Los formatos para la presentación de los requisitos establecidos en los párrafos 1, 8, 9 y 10, estarán disponibles en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en las oficinas del Instituto Nacional Electoral.

Si fuera el caso de que las y los interesados, con motivo de alguna convocatoria anterior hubieran presentado al Instituto Nacional Electoral copia certificada del acta de nacimiento; del título o cédula profesional de nivel licenciatura y los mismos obraran en los archivos del Instituto, deberán hacerlo del conocimiento en su solicitud de registro de la presente Convocatoria, los cuales se ubicarán en una situación de excepción para exhibirlos, una vez que la autoridad nacional electoral verifique su resguardo documental.

De ser el caso que la solicitud de la o el aspirante se realice el día 17 de agosto de 2018, la Unidad Técnica contará con el término de veinticuatro horas para verificar en sus archivos la existencia de dichos documentos, y en caso de que no cuente con ellos, requerirá a la o el aspirante para que dentro del término de cuarenta y ocho horas los remita digitalizados a través de correo electrónico y de igual forma en forma física, a través de la Junta Local o Distrital de su entidad federativa.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

QUINTA. Plazos y horarios para el registro

Las y los aspirantes deberán presentar los formatos referidos en las Bases Primera y Cuarta para solicitar su registro del **13 al 17 de agosto de 2018**, en la Secretaría Ejecutiva, en la Junta Local Ejecutiva o en las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral correspondientes al estado de Durango, en los domicilios citados en la Base Primera de la presente Convocatoria, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).

SEXTA. Notificaciones.

Todas las notificaciones se harán mediante el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, salvo aquéllas que deban realizarse de manera personal a las y los aspirantes, mismas que se harán mediante el correo electrónico que hayan registrado y que deberán ser acusadas de recibido por los aspirantes de forma inmediata a su recepción, en el entendido de que quienes no lo hagan dentro de las veinticuatro horas posteriores a su envío, se darán por debidamente notificados.

Las ciudadanas o ciudadanos designados por el Consejo General serán notificados en los términos del artículo 24, párrafo 7, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

SÉPTIMA. Etapas del proceso de selección y designación.

El proceso de selección de las Consejeras o Consejeros Electorales del órgano superior de dirección del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango se desarrollará de conformidad con las siguientes etapas:

1. Registro de aspirantes. Las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en el estado de Durango, así como la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral recibirán, en las fechas establecidas en la Base Quinta de la presente Convocatoria, las solicitudes y la documentación que presenten las y los aspirantes o por persona autorizada por escrito, siempre y cuando en la solicitud aparezca la firma autógrafa de dichos aspirantes para ocupar el cargo convocado. Cada órgano receptor será el responsable de concentrar las solicitudes y documentación correspondiente para la integración de los expedientes.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

En las sedes de las Juntas Local y Distritales del estado de Durango, así como de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, se proporcionará el apoyo necesario para llevar a cabo el registro en el sistema habilitado para la presente Convocatoria.

Al momento de presentar la solicitud de registro y entregar la documentación correspondiente, las y los aspirantes recibirán un acuse con un folio asignado y la descripción de la información y documentación entregada al Instituto, el cual deberán firmar de conformidad. El mencionado comprobante tendrá como único propósito acusar de recibida la documentación ahí referida, por lo que en ningún caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos de esta Convocatoria.

La Junta Local Ejecutiva será la responsable de concentrar los expedientes de las y los aspirantes que se presenten ante la misma y ante las Juntas Distritales Ejecutivas, elaborando una lista de aquéllos que presentaron su solicitud, señalando las inconsistencias u omisiones en los documentos presentados, las cuales serán puestas a consideración de la Comisión de Vinculación.

A más tardar el **20 de agosto de 2018**, la Junta Local Ejecutiva remitirá los expedientes a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante Unidad de Vinculación) para que ésta los entregue tanto en físico como en versión electrónica al Presidente de la Comisión de Vinculación. Al resto de las y los Consejeros del Consejo General se les entregará una copia en medio electrónico.

Los expedientes originales estarán bajo resguardo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación, quien los pondrá a disposición para consulta de las y los integrantes del Consejo General y de la propia Comisión.

La Secretaría Ejecutiva y las Juntas Local y Distritales no podrán descartar o rechazar solicitud alguna que se les presente. En caso de que algún aspirante no entregue la totalidad de la documentación, podrá subsanar la omisión siempre y cuando se encuentre dentro del periodo de registro establecido en la presente Convocatoria o a solicitud expresa de la Unidad de Vinculación.

2. Verificación de los requisitos legales. La Comisión de Vinculación, con el apoyo de los grupos de trabajo que en su caso se conformen, verificará el cumplimiento de los requisitos legales, y aprobará, a más tardar el **28 de agosto de 2018**, el Acuerdo que contenga la relación con los nombres y apellidos de las y los

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

aspirantes que cumplen con todos los requisitos y ordenará su publicación, agregando el resumen curricular de cada uno de los aspirantes.

En el mismo Acuerdo, la Comisión de Vinculación aprobará la sede y horario en que se aplicará el examen de conocimientos.

La Unidad de Vinculación publicará la guía de estudio y las condiciones del examen de conocimientos, en la misma fecha en la que se habiliten los formatos de registro de aspirantes en la página del Instituto; es decir, el **23 de julio**.

La información prevista en los párrafos anteriores deberá ser publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas en el estado de Durango.

3. Examen de conocimientos. Las y los aspirantes que hayan cumplido con todos los requisitos legales serán convocados a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, para presentar el examen de conocimientos, mismo que tendrá verificativo el día **1 de septiembre de 2018**, en la sede previamente definida y publicada en el portal del Instituto por la Unidad de Vinculación. La fecha para la presentación del examen será inamovible, por lo que no podrá aplicarse en otra diversa, por ninguna causa.

El examen comprenderá dos apartados: el primero, de competencias básicas, que comprende las áreas comunicativa y matemática, el cual tendrá una ponderación en la calificación de 40%. El segundo será de conocimientos técnicos, y comprenderá las áreas teórico-normativa y de procedimientos electorales, el cual tendrá una ponderación en la calificación de 60%.

La estructura y el contenido del examen de conocimientos serán debidamente establecidos en la guía de estudios que se publicará en la página del Instituto.

Las y los aspirantes deberán identificarse con credencial para votar o identificación oficial con fotografía vigente. La aplicación y evaluación del examen de conocimientos estará a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).

La Comisión de Vinculación solicitará al Ceneval que la entrega de los resultados se realice con listas diferenciadas de mujeres y hombres, en orden de mayor a menor calificación. De tal manera que pasarán a la siguiente etapa 12 aspirantes mujeres y 12 aspirantes hombres que obtengan la mejor calificación, siempre y

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

cuando ésta sea igual o mayor a seis. En caso de empate en la posición número 12, accederán las y los aspirantes que se encuentren en este supuesto.

Los resultados del examen de conocimientos se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día **13 de septiembre de 2018**, ordenados de mayor a menor calificación y diferenciando las listas de la forma siguiente:

- a) Nombre de las aspirantes que acceden a la siguiente etapa;
- b) Nombre de los aspirantes que acceden a la siguiente etapa; y
- c) Folios de las y los aspirantes que no pasan a la siguiente etapa.

A partir de dicha publicación, las y los aspirantes que no hubiesen accedido a la siguiente etapa, tendrán hasta el día **17 de septiembre de 2018** para en su caso, solicitar por escrito al correo electrónico revisiones.utvopl@ine.mx o ante la Unidad de Vinculación, la revisión del examen, misma que tendrá verificativo a partir del día **18 de septiembre de 2018**. La Unidad de Vinculación notificará a las y los solicitantes a través del correo electrónico que hayan proporcionado, la fecha, hora y lugar para la realización de la sesión de revisión. En todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la Ciudad de México.

Para la revisión del examen, se llevará a cabo una sesión por cada solicitante y a la misma acudirán personalmente la o el aspirante, un representante de Ceneval, y un representante de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación o la o el funcionario que ésta designe, quien levantará un acta de revisión de examen que deberá ser firmada por quienes intervengan en dicho acto. Para el desahogo de dicha sesión, la Institución evaluadora del examen proporcionará a la Secretaría Técnica todos los elementos necesarios para salvaguardar el derecho de audiencia y debido proceso del solicitante.

Si los resultados de la revisión realizada determinan que la o el sustentante obtuvo una calificación igual o superior a la posición 12, la Comisión de Vinculación ordenará su inclusión en la siguiente etapa, sin perjuicio de las y los aspirantes ya incluidos en las listas publicadas.

Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

4. Ensayo presencial. Las y los aspirantes que acrediten la etapa del examen de conocimientos, presentarán un ensayo de manera presencial, el **22 de septiembre de 2018**.

El Consejo General aprobará los lineamientos que establezcan lo siguiente:

- a) La institución de educación superior, de investigación o evaluación responsable de la aplicación y calificación de los ensayos presenciales;
- b) Criterios para la elaboración y dictamen de los ensayos presenciales;
- c) Requisitos formales para la aplicación del ensayo; y
- d) Fecha de entrega de resultados por parte de la institución educativa designada.

Los lineamientos aprobados serán notificados a las y los aspirantes, así como las sedes y horarios de aplicación, a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. La fecha para la elaboración del ensayo será inamovible, por lo que no podrá presentarse en otra fecha, bajo ningún motivo.

A través de la elaboración y presentación del ensayo, las y los aspirantes serán evaluados sobre la habilidad que posean para definir, situar y delimitar un problema del ámbito electoral, a partir de la delimitación y contextualización de un problema central, de la identificación de los actores relevantes y los escenarios posibles, analizar los riesgos y oportunidades, para desarrollar propuesta operativas a efecto de gestionar o resolver los problemas identificados; no así sobre su postura u opinión particular con respecto al tema desarrollado. De esta manera, el ensayo permitirá calificar la capacidad de análisis, el desarrollo argumentativo, el planteamiento del problema y el desarrollo de escenarios y posibles soluciones, con el objeto de establecer una estrategia y una ruta crítica de acción con base en las atribuciones y competencias legales de los Organismos Públicos Locales.

La aplicación de los ensayos y su dictamen estará a cargo de la institución designada, que determinará quiénes son las y los aspirantes cuyo ensayo sea dictaminado como idóneo. Los ensayos serán evaluados por tres académicos que determine la propia institución y será idóneo el ensayo de la o el aspirante que obtenga al menos dos dictámenes favorables.

La institución designada entregará los tres dictámenes de cada uno de las y los aspirantes a la Comisión de Vinculación, a través de la Unidad de Vinculación a más tardar el día **11 de octubre de 2018**.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Los resultados del ensayo se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día **11 de octubre de 2018**, en listas diferenciadas, de acuerdo con lo siguiente:

- a) Nombre de las aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
- b) Nombre de los aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
- c) Folios de las y los aspirantes con dictamen de ensayo no idóneo.

Una vez que se tenga la lista de las y los aspirantes que hayan resultado con dictamen idóneo en el ensayo, la Comisión de Vinculación la hará de conocimiento público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y la notificará a las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, quienes podrán presentar por escrito, dentro de los cinco días hábiles siguientes, ante la misma Comisión, las observaciones y comentarios que consideren convenientes respecto de cada una de las y los aspirantes; el escrito deberá acompañarse de los elementos objetivos que sustenten o corroboren sus afirmaciones.

A partir de dicha publicación, aquellos aspirantes cuyo ensayo haya sido dictaminado como no idóneo, tendrán derecho a solicitar por escrito, hasta el día **15 de octubre de 2018**, su revisión ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Durango o directamente ante la Unidad de Vinculación. La diligencia de revisión de ensayo deberá efectuarse a partir del día **16 de octubre de 2018**. En todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la Ciudad de México.

Si los resultados de la revisión realizada arrojan que el ensayo de la o el aspirante obtuvo un dictamen idóneo, la Comisión de Vinculación lo hará del conocimiento de las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para que en un término de dos días hábiles emitan las observaciones a que haya lugar en los términos precitados.

Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

Concluido el plazo de observaciones de las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, la Comisión de Vinculación hará del conocimiento público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, la relación de quienes, al no tener algún impedimento legal y habiendo aprobado las etapas anteriores, pasarán a la etapa

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

de valoración curricular y entrevista, conforme al calendario que apruebe la Comisión de Vinculación para tal efecto.

5. Valoración curricular y entrevista. Para los efectos de esta Convocatoria, la valoración curricular y la entrevista serán consideradas una misma etapa.

Las y los aspirantes cuyo ensayo resulte idóneo y se considere que no existen elementos objetivos aportados por las y los representantes de los partidos políticos o por Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para descalificarlos como aspirantes, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista.

El Consejo General, a propuesta de la Comisión de Vinculación, aprobará los criterios para realizar la valoración curricular y la entrevista, los que deberán considerar al menos lo siguiente:

- a) Propósito;
- b) Responsables de conducir las entrevistas;
- c) Procedimiento para la calificación;
- d) Las competencias a valorar;
- e) Ponderación que se utilizará para la calificación;
- f) Instrumento que se utilizará para la calificación.

Los criterios que apruebe el Consejo General serán notificados a las y los aspirantes a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx

Esta etapa estará a cargo de las y los Consejeros Electorales del Instituto, los cuales conformarán grupos de entrevistadores.

Al efecto, se procurará un equilibrio entre géneros en la conformación de las listas de las y los aspirantes que accedan a dicha etapa, para lo cual, la Comisión de Vinculación integrará las listas diferenciadas de hombres y mujeres cuyo ensayo presencial haya sido dictaminado como idóneo.

Las entrevistas se realizarán conforme al calendario y sedes que previamente apruebe la Comisión de Vinculación. La información sobre el calendario y la sede se publicará en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. Asimismo, se notificará a las y los aspirantes al correo electrónico proporcionado por los mismos, debiendo acusar de recibida dicha actuación. De la misma forma, se publicará en los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en el estado de Durango.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Las entrevistas serán transmitidas en tiempo real en el portal del Instituto www.ine.mx, serán grabadas en video y estarán disponibles en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral.

En la etapa de valoración curricular y entrevista se identificará que el perfil de las y los aspirantes se apegue a los principios rectores de la función electoral y cuente con las competencias indispensables para determinar la idoneidad de las y los aspirantes para el desempeño del cargo.

La entrevista será presencial, se realizará en panel con al menos tres Consejeros o Consejeras Electorales, y deberá atender al proceso siguiente:

- a) **Antes de la entrevista.** Las y los aspirantes deberán presentarse por lo menos 30 minutos previos a la hora de inicio de la entrevista.
- b) **Durante la entrevista.** Se conforma de tres etapas: apertura, desarrollo y cierre; tendrá una duración de hasta 20 minutos.
- c) **Después de la entrevista.** Al finalizar el proceso de entrevista, cada Consejera o Consejero Electoral deberá asentar el valor cuantificable de cada uno de los rubros que conforman la cédula de valoración curricular y entrevista.

Excepcionalmente, previa causa justificada, las entrevistas podrán llevarse a cabo de manera virtual mediante el uso de tecnologías de la información.

Las y los Consejeros Electorales del Consejo General podrán utilizar cualquier documento, insumo o herramienta que coadyuve a la realización de la entrevista.

En atención al principio de máxima publicidad, las cédulas de los aspirantes se harán públicas en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

OCTAVA. Integración de las listas de candidatas y candidatos

Conforme a lo previsto en los artículos 100, párrafos 1 y 3 y 101, párrafos 1, inciso f), 3 y 4 de la Ley General y 24, párrafo 1, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, la Comisión de Vinculación presentará al Consejo General una lista con la totalidad de los nombres de las y los candidatos a ocupar el cargo.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

La propuesta de la o el candidato deberá contener un dictamen debidamente fundado y motivado, que incluya todas las etapas del proceso de selección, además de los elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad y capacidad para el cargo de la o el aspirante.

Una vez elaborada la propuesta de la o el candidato, respaldada con el dictamen respectivo, la Comisión de Vinculación deberá someterla a la consideración del Consejo General con una anticipación no menor a setenta y dos horas previas a la sesión que corresponda.

NOVENA. Designaciones

El Consejo General designará a más tardar el día **1 de noviembre de 2018**, por mayoría de ocho votos, a las Consejeras o Consejeros Electorales que iniciarán el encargo de siete años en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango, especificando, en su caso, el periodo o la conclusión del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, párrafo 1, incisos a), g) y jj), de la Ley General, y del Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

La fecha mencionada en el párrafo anterior será tomada como base para determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Base Tercera, párrafos 3 y 4 de la presente Convocatoria.

Con base en los artículos 24, párrafo 9, y 27 párrafo 4 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, en la designación de las o los Consejeros Electorales correspondientes, se procurará observar el principio de paridad de género considerando la integración del órgano superior de dirección del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango.

El Consejo General deberá ordenar la publicación del acuerdo de designación en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del estado de Durango, así como comunicar a las autoridades locales la designación. Asimismo, ordenará a la Secretaría Ejecutiva notificar el acuerdo respectivo a la o el ciudadano designado.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

La ciudadana o el ciudadano que haya sido designado como Consejera o Consejero Electoral, deberá acreditar o manifestar bajo protesta de decir verdad, dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación del Acuerdo de designación, que no desempeña ningún empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos relacionados con actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia no remunerados.

La lista que contenga el nombre de las Consejeras o Consejeros Electorales designados será publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

DÉCIMA. Nombramiento y toma de protesta

Las o los ciudadanos que hayan sido designados recibirán el nombramiento que lo acredita como Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango; mismo que contendrá, entre otras cosas el nombre y apellidos, cargo, periodo y fecha de expedición.

Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados rendirán protesta en la fecha que determine el acuerdo de designación que apruebe el Consejo General. Se rendirá protesta en la sede del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango y deberá incluirse el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución Política del estado y las leyes que de ellas emanen, así como el apego a los principios rectores de la función electoral.

Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados no podrán ser reelectos, acorde a lo establecido en el artículo 116, base IV, inciso c), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DÉCIMA PRIMERA. Transparencia

El resultado de cada una de las etapas deberá hacerse público a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y por los demás medios que determine la Comisión de Vinculación, en los términos establecidos para cada etapa en la presente Convocatoria.

La información y documentación que integre los expedientes individuales de las y los aspirantes será confidencial en términos de lo establecido en el artículo 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que no podrá tener otro fin que el previsto en el proceso objeto de la presente Convocatoria, ni ser utilizada o difundida salvo que medie el

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

consentimiento expreso del titular conforme al Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En atención al principio de máxima publicidad, el Instituto realizará la publicación de la información más relevante de cada aspirante, utilizando para este propósito la que se encuentra contenida en el resumen curricular, entregada por cada aspirante al momento de su registro.

DÉCIMA SEGUNDA. Casos no previstos

Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la Comisión de Vinculación, con base en lo dispuesto en el Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

Para mayores informes favor de comunicarse a los teléfonos:

Junta Local Ejecutiva	(01-618) 204-01-00 / (01-618) 204-01-08	
Junta Distrital 01	(01-618) 135-41-54 / (01-618) 135-41-55	Junta Distrital 02 (01-871) 715-59-19 / (01-871) 715-28-61
Junta Distrital 03	(01-676) 101-42-32 / (01-676) 101-42-13	Junta Distrital 04 (01-618) 811-42-50 / (01-618) 811-40-92

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero y 41, Base V, apartado C, último párrafo; 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo 1, inciso d); 4, párrafo 2; 6, párrafo 2; 29, párrafo 1; 30, párrafo 2; 31, párrafos 1 y 4; 32, párrafo 2, inciso b); 39, párrafo 2; 42, párrafos 5, 6, 8 y 10; 43; 44, párrafo 1, incisos a), g) y jj); 45, párrafo 1, inciso a); 46, párrafo 1, inciso k); 60 inciso e); 99, párrafo 1; 100 y 101, de la Ley General; 73, inciso i) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

CONVOCA:

A las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 100, párrafos 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante Ley General); y artículo 9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, y deseen participar en el proceso de selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, a solicitar su registro y presentar su documentación de aspirante conforme a las siguientes:

BASES:

PRIMERA. Aspectos generales

Las y los aspirantes interesados en participar en el proceso de selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, deberán llenar los formatos que para tal efecto se pondrán a disposición en el portal del Instituto www.ine.mx, desde el **23 de julio al 17 de agosto 2018**.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Una vez requisitados los formatos, deberán imprimirse, **verificar que la información capturada se encuentre completa al imprimir el formato** y firmarse. Los formatos tendrán como único propósito recabar la información de las y los aspirantes, por lo que en ningún caso se podrán considerar como una constancia de registro al proceso de selección y designación.

Tanto los formatos como la documentación solicitada en la presente Convocatoria se recibirán del **13 al 17 de agosto de 2018**, en las oficinas de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas o en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).

Quien así lo requiera podrá asistir a las oficinas antes mencionadas para ser auxiliados en el llenado de los formatos.

La recepción de solicitudes debidamente requisitadas se realizará ante los siguientes órganos del Instituto Nacional Electoral:

Secretaría Ejecutiva

Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio A, Planta Alta, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México, C.P. 14610.

Junta Local Ejecutiva

Avenida Ayuntamiento No. 203, Colonia Fraccionamiento Colosio, Pachuca de Soto, Hidalgo, C. P. 42088.

Junta Distrital 01

Calle Eloxochitlán No. 3, Altos, Colonia Santa Irene, Huejutla de Reyes, Hidalgo, C. P. 43000.

Junta Distrital 02

Lázaro Cárdenas No. 14, Colonia El Bondho, Ixmiquilpan, Hidalgo, C. P. 42300.

Junta Distrital 03

Avenida 5 de mayo No. 184, Colonia Centro Sur, Actopan, Hidalgo, C. P. 42500.

Junta Distrital 04

Calle Vicente Guerrero No. 607-A, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, Colonia Centro, C. P. 43600.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Junta Distrital 05

Boulevard Tula-Iturbe No. 1126, Interior 1, Colonia Iturbe, Tula de Allende, Hidalgo, C. P. 42803.

Junta Distrital 06

Boulevard Everardo Márquez No.804, Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán, Pachuca de Soto, Hidalgo, C. P. 42086.

Junta Distrital 07

Avenida Felipe Ángeles No. 29, Colonia 18 de Marzo, Tepeapulco, Hidalgo, C. P. 43973.

Las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 100, párrafo 2 de la Ley General y en el artículo 9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, podrán inscribirse como aspirantes al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.

De conformidad con el artículo 13, párrafo 4, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, las y los aspirantes que participen en el proceso de selección y designación en todo momento deberán mantener el cumplimiento de requisitos; de no ser así, la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante Comisión de Vinculación), descartará a la o el aspirante que se encuentre en este supuesto en cualquier etapa del proceso.

SEGUNDA. Cargo y periodo a designar.

El proceso de selección tiene como propósito designar a tres Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, que durarán en su encargo siete años, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 101, párrafo 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

TERCERA. Requisitos.

Las y los interesados en ocupar el cargo referido en la Base Segunda deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
2. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente;
3. Tener más de 30 años cumplidos al día de la designación;
4. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel licenciatura;
5. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
6. Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
7. No haber sido registrado como candidata o candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación;
8. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación;
9. No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;
10. No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación como de las entidades federativas, ni subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno. No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni Gobernadora o Gobernador, ni Secretaria o Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser Presidenta o Presidente Municipal, Síndico (a) o Regidor (a) o titular de dependencia de los Ayuntamientos; y
11. No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo o de cualquier otra entidad federativa.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

CUARTA. Documentación a entregar.

Las y los interesados deberán presentar la siguiente documentación:

1. Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto;
2. Copia certificada del acta de nacimiento;
3. En caso de no ser originario de la entidad federativa correspondiente, deberá presentar una constancia que acredite una residencia efectiva en la entidad de por lo menos cinco años anteriores a la fecha de designación establecida en la Convocatoria; dicha constancia deberá ser expedida por autoridad competente. En su caso, el documento con el que compruebe ubicarse en una excepción por razón de ausencia del país por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
4. Original y copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, para su certificación;
5. Dos fotografías recientes tamaño infantil a color;
6. Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la solicitud con una antigüedad máxima de tres meses;
7. Copia certificada del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha de expedición mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la Convocatoria para la designación;
8. Currículum vitae firmado por la o el aspirante a través del formato que para tal efecto estará disponible en el portal del Instituto, el cual deberá contener, entre otros datos: nombre y apellidos completos, domicilio, teléfonos y correo electrónico, estudios realizados, trayectoria laboral, académica, política, docente y profesional, publicaciones, actividad empresarial, cargos de elección popular, organizaciones de cualquier tipo a las que pertenezca y el carácter de su participación, así como el empleo, cargo o comisión que, en su caso, desempeñe al momento del registro;
9. Resumen curricular con una extensión máxima de una cuartilla con letra Arial 12, para su eventual publicación, por lo que no deberá contener datos personales privados. Para lo anterior, deberá emplear el formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto; y
10. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa (empleando el formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto), en la que se manifieste:
 - a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

- b) No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
- c) No haber sido registrado como candidata o candidato a cargo alguno de elección popular durante los cuatro años anteriores a la designación;
- d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación;
- e) No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;
- f) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno federal o de las entidades federativas, ni subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno;
- g) No ser jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni gobernadora o gobernador, ni secretaria o secretario de gobierno o su equivalente a nivel local;
- h) No ser jefe o jefa delegacional, presidenta o presidente municipal, síndica o síndico o regidora o regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos;
- i) No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo o de cualquier otra entidad federativa;
- j) La aceptación de dar por concluido todo empleo, cargo o comisión en caso de ser designado como Consejera o Consejero Presidente;
- k) Toda la información que, con motivo del proceso de selección a que se refiere la Convocatoria, ha proporcionado o llegue a proporcionar es veraz y toda la documentación que ha entregado o llegue a entregar es auténtica;
- l) La aceptación de sujetarse a la Convocatoria y a las reglas establecidas en el presente proceso de selección; y
- m) Consentimiento para que sus datos personales sean utilizados únicamente para los fines de la convocatoria.

Los formatos para la presentación de los requisitos establecidos en los párrafos 1, 8, 9 y 10, estarán disponibles en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en las oficinas del Instituto Nacional Electoral.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Si fuera el caso de que las y los interesados, con motivo de alguna convocatoria anterior hubieran presentado al Instituto Nacional Electoral copia certificada del acta de nacimiento; del título o cédula profesional de nivel licenciatura y los mismos obraran en los archivos del Instituto, deberán hacerlo del conocimiento en su solicitud de registro de la presente Convocatoria, los cuales se ubicarán en una situación de excepción para exhibirlos, una vez que la autoridad nacional electoral verifique su resguardo documental.

De ser el caso que la solicitud de la o el aspirante se realice el día 17 de agosto de 2018, la Unidad Técnica contará con el término de veinticuatro horas para verificar en sus archivos la existencia de dichos documentos, y en caso de que no cuente con ellos, requerirá a la o el aspirante para que dentro del término de cuarenta y ocho horas los remita digitalizados a través de correo electrónico y de igual forma en forma física, a través de la Junta Local o Distrital de su entidad federativa.

QUINTA. Plazos y horarios para el registro

Las y los aspirantes deberán presentar los formatos referidos en las Bases Primera y Cuarta para solicitar su registro del **13 al 17 de agosto de 2018**, en la Secretaría Ejecutiva, en la Junta Local Ejecutiva o en las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral correspondientes al estado de Hidalgo, en los domicilios citados en la Base Primera de la presente Convocatoria, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).

SEXTA. Notificaciones.

Todas las notificaciones se harán mediante el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, salvo aquéllas que deban realizarse de manera personal a las y los aspirantes, mismas que se harán mediante el correo electrónico que hayan registrado y que deberán ser acusadas de recibido por los aspirantes de forma inmediata a su recepción, en el entendido de que quienes no lo hagan dentro de las veinticuatro horas posteriores a su envío, se darán por debidamente notificados.

Las ciudadanas o ciudadanos designados por el Consejo General serán notificados en los términos del artículo 24, párrafo 7, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

SÉPTIMA. Etapas del proceso de selección y designación.

El proceso de selección de las Consejeras o Consejeros Electorales del órgano superior de dirección del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo se desarrollará de conformidad con las siguientes etapas:

1. Registro de aspirantes. Las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en el estado de Hidalgo, así como la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral recibirán, en las fechas establecidas en la Base Quinta de la presente Convocatoria, las solicitudes y la documentación que presenten las y los aspirantes o por persona autorizada por escrito, siempre y cuando en la solicitud aparezca la firma autógrafa de dichos aspirantes para ocupar el cargo convocado. Cada órgano receptor será el responsable de concentrar las solicitudes y documentación correspondiente para la integración de los expedientes.

En las sedes de las Juntas Local y Distritales del estado de Hidalgo, así como de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, se proporcionará el apoyo necesario para llevar a cabo el registro en el sistema habilitado para la presente Convocatoria.

Al momento de presentar la solicitud de registro y entregar la documentación correspondiente, las y los aspirantes recibirán un acuse con un folio asignado y la descripción de la información y documentación entregada al Instituto, el cual deberán firmar de conformidad. El mencionado comprobante tendrá como único propósito acusar de recibida la documentación ahí referida, por lo que en ningún caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos de esta Convocatoria.

La Junta Local Ejecutiva será la responsable de concentrar los expedientes de las y los aspirantes que se presenten ante la misma y ante las Juntas Distritales Ejecutivas, elaborando una lista de aquéllos que presentaron su solicitud, señalando las inconsistencias u omisiones en los documentos presentados, las cuales serán puestas a consideración de la Comisión de Vinculación.

A más tardar el **20 de agosto de 2018**, la Junta Local Ejecutiva remitirá los expedientes a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante Unidad de Vinculación) para que ésta los entregue tanto en físico como en versión electrónica al Presidente de la Comisión de Vinculación. Al resto de las y los Consejeros del Consejo General se les entregará una copia en medio electrónico.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Los expedientes originales estarán bajo resguardo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación, quien los pondrá a disposición para consulta de las y los integrantes del Consejo General y de la propia Comisión.

La Secretaría Ejecutiva y las Juntas Local y Distritales no podrán descartar o rechazar solicitud alguna que se les presente. En caso de que algún aspirante no entregue la totalidad de la documentación, podrá subsanar la omisión siempre y cuando se encuentre dentro del periodo de registro establecido en la presente Convocatoria o a solicitud expresa de la Unidad de Vinculación.

2. Verificación de los requisitos legales. La Comisión de Vinculación, con el apoyo de los grupos de trabajo que en su caso se conformen, verificará el cumplimiento de los requisitos legales, y aprobará, a más tardar el **28 de agosto de 2018**, el Acuerdo que contenga la relación con los nombres y apellidos de las y los aspirantes que cumplen con todos los requisitos y ordenará su publicación, agregando el resumen curricular de cada uno de los aspirantes.

En el mismo Acuerdo, la Comisión de Vinculación aprobará la sede y horario en que se aplicará el examen de conocimientos.

La Unidad de Vinculación publicará la guía de estudio y las condiciones del examen de conocimientos, en la misma fecha en la que se habiliten los formatos de registro de aspirantes en la página del Instituto; es decir, el **23 de julio**.

La información prevista en los párrafos anteriores deberá ser publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas en el estado de Hidalgo.

3. Examen de conocimientos. Las y los aspirantes que hayan cumplido con todos los requisitos legales serán convocados a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, para presentar el examen de conocimientos, mismo que tendrá verificativo el día **1 de septiembre de 2018**, en la sede previamente definida y publicada en el portal del Instituto por la Unidad de Vinculación. La fecha para la presentación del examen será inamovible, por lo que no podrá aplicarse en otra diversa, por ninguna causa.

El examen comprenderá dos apartados: el primero, de competencias básicas, que comprende las áreas comunicativa y matemática, el cual tendrá una ponderación en la calificación de 40%. El segundo será de conocimientos técnicos, y

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

comprenderá las áreas teórico-normativa y de procedimientos electorales, el cual tendrá una ponderación en la calificación de 60%.

La estructura y el contenido del examen de conocimientos serán debidamente establecidos en la guía de estudios que se publicará en la página del Instituto.

Las y los aspirantes deberán identificarse con credencial para votar o identificación oficial con fotografía vigente. La aplicación y evaluación del examen de conocimientos estará a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).

La Comisión de Vinculación solicitará al Ceneval que la entrega de los resultados se realice con listas diferenciadas de mujeres y hombres, en orden de mayor a menor calificación. De tal manera que pasarán a la siguiente etapa 12 aspirantes mujeres y 12 aspirantes hombres que obtengan la mejor calificación, siempre y cuando ésta sea igual o mayor a seis. En caso de empate en la posición número 12, accederán las y los aspirantes que se encuentren en este supuesto.

Los resultados del examen de conocimientos se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día **13 de septiembre de 2018**, ordenados de mayor a menor calificación y diferenciando las listas de la forma siguiente:

- a) Nombre de las aspirantes que acceden a la siguiente etapa;
- b) Nombre de los aspirantes que acceden a la siguiente etapa; y
- c) Folios de las y los aspirantes que no pasan a la siguiente etapa.

A partir de dicha publicación, las y los aspirantes que no hubiesen accedido a la siguiente etapa, tendrán hasta el día **17 de septiembre de 2018** para en su caso, solicitar por escrito al correo electrónico revisiones.utvopl@ine.mx o ante la Unidad de Vinculación, la revisión del examen, misma que tendrá verificativo a partir del día **18 de septiembre de 2018**. La Unidad de Vinculación notificará a las y los solicitantes a través del correo electrónico que hayan proporcionado, la fecha, hora y lugar para la realización de la sesión de revisión. En todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la Ciudad de México.

Para la revisión del examen, se llevará a cabo una sesión por cada solicitante y a la misma acudirán personalmente la o el aspirante, un representante de Ceneval, y un representante de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación o la o el

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

funcionario que ésta designe, quien levantará un acta de revisión de examen que deberá ser firmada por quienes intervengan en dicho acto. Para el desahogo de dicha sesión, la Institución evaluadora del examen proporcionará a la Secretaría Técnica todos los elementos necesarios para salvaguardar el derecho de audiencia y debido proceso del solicitante.

Si los resultados de la revisión realizada determinan que la o el sustentante obtuvo una calificación igual o superior a la posición 12, la Comisión de Vinculación ordenará su inclusión en la siguiente etapa, sin perjuicio de las y los aspirantes ya incluidos en las listas publicadas.

Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

4. Ensayo presencial. Las y los aspirantes que acrediten la etapa del examen de conocimientos, presentarán un ensayo de manera presencial, el **22 de septiembre de 2018**.

El Consejo General aprobará los lineamientos que establezcan lo siguiente:

- a) La institución de educación superior, de investigación o evaluación responsable de la aplicación y calificación de los ensayos presenciales;
- b) Criterios para la elaboración y dictamen de los ensayos presenciales;
- c) Requisitos formales para la aplicación del ensayo; y
- d) Fecha de entrega de resultados por parte de la institución educativa designada.

Los lineamientos aprobados serán notificados a las y los aspirantes, así como las sedes y horarios de aplicación, a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. La fecha para la elaboración del ensayo será inamovible, por lo que no podrá presentarse en otra fecha, bajo ningún motivo.

A través de la elaboración y presentación del ensayo, las y los aspirantes serán evaluados sobre la habilidad que posean para definir, situar y delimitar un problema del ámbito electoral, a partir de la delimitación y contextualización de un problema central, de la identificación de los actores relevantes y los escenarios posibles, analizar los riesgos y oportunidades, para desarrollar propuesta operativas a efecto de gestionar o resolver los problemas identificados; no así sobre su postura u opinión particular con respecto al tema desarrollado. De esta manera, el ensayo permitirá calificar la capacidad de análisis, el desarrollo argumentativo, el

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

planteamiento del problema y el desarrollo de escenarios y posibles soluciones, con el objeto de establecer una estrategia y una ruta crítica de acción con base en las atribuciones y competencias legales de los Organismos Públicos Locales.

La aplicación de los ensayos y su dictamen estará a cargo de la institución designada, que determinará quiénes son las y los aspirantes cuyo ensayo sea dictaminado como idóneo. Los ensayos serán evaluados por tres académicos que determine la propia institución y será idóneo el ensayo de la o el aspirante que obtenga al menos dos dictámenes favorables.

La institución designada entregará los tres dictámenes de cada uno de las y los aspirantes a la Comisión de Vinculación, a través de la Unidad de Vinculación a más tardar el día **11 de octubre de 2018**.

Los resultados del ensayo se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día **11 de octubre de 2018**, en listas diferenciadas, de acuerdo con lo siguiente:

- a) Nombre de las aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
- b) Nombre de los aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
- c) Folios de las y los aspirantes con dictamen de ensayo no idóneo.

Una vez que se tenga la lista de las y los aspirantes que hayan resultado con dictamen idóneo en el ensayo, la Comisión de Vinculación la hará de conocimiento público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y la notificará a las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, quienes podrán presentar por escrito, dentro de los cinco días hábiles siguientes, ante la misma Comisión, las observaciones y comentarios que consideren convenientes respecto de cada una de las y los aspirantes; el escrito deberá acompañarse de los elementos objetivos que sustenten o corroboren sus afirmaciones.

A partir de dicha publicación, aquellos aspirantes cuyo ensayo haya sido dictaminado como no idóneo, tendrán derecho a solicitar por escrito, hasta el día **15 de octubre de 2018**, su revisión ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Hidalgo o directamente ante la Unidad de Vinculación. La diligencia de revisión de ensayo deberá efectuarse a partir del día **16 de octubre de 2018**. En todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la Ciudad de México.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Si los resultados de la revisión realizada arrojan que el ensayo de la o el aspirante obtuvo un dictamen idóneo, la Comisión de Vinculación lo hará del conocimiento de las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para que en un término de dos días hábiles emitan las observaciones a que haya lugar en los términos precitados.

Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

Concluido el plazo de observaciones de las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, la Comisión de Vinculación hará del conocimiento público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, la relación de quienes, al no tener algún impedimento legal y habiendo aprobado las etapas anteriores, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista, conforme al calendario que apruebe la Comisión de Vinculación para tal efecto.

5. Valoración curricular y entrevista. Para los efectos de esta Convocatoria, la valoración curricular y la entrevista serán consideradas una misma etapa.

Las y los aspirantes cuyo ensayo resulte idóneo y se considere que no existen elementos objetivos aportados por las y los representantes de los partidos políticos o por Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para descalificarlos como aspirantes, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista.

El Consejo General, a propuesta de la Comisión de Vinculación, aprobará los criterios para realizar la valoración curricular y la entrevista, los que deberán considerar al menos lo siguiente:

- a) Propósito;
- b) Responsables de conducir las entrevistas;
- c) Procedimiento para la calificación;
- d) Las competencias a valorar;
- e) Ponderación que se utilizará para la calificación;
- f) Instrumento que se utilizará para la calificación.

Los criterios que apruebe el Consejo General serán notificados a las y los aspirantes a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Esta etapa estará a cargo de las y los Consejeros Electorales del Instituto, los cuales conformarán grupos de entrevistadores.

Al efecto, se procurará un equilibrio entre géneros en la conformación de las listas de las y los aspirantes que accedan a dicha etapa, para lo cual, la Comisión de Vinculación integrará las listas diferenciadas de hombres y mujeres cuyo ensayo presencial haya sido dictaminado como idóneo.

Las entrevistas se realizarán conforme al calendario y sedes que previamente apruebe la Comisión de Vinculación. La información sobre el calendario y la sede se publicará en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. Asimismo, se notificará a las y los aspirantes al correo electrónico proporcionado por los mismos, debiendo acusar de recibida dicha actuación. De la misma forma, se publicará en los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en el estado de Hidalgo.

Las entrevistas serán transmitidas en tiempo real en el portal del Instituto www.ine.mx, serán grabadas en video y estarán disponibles en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral.

En la etapa de valoración curricular y entrevista se identificará que el perfil de las y los aspirantes se apegue a los principios rectores de la función electoral y cuente con las competencias indispensables para determinar la idoneidad de las y los aspirantes para el desempeño del cargo.

La entrevista será presencial, se realizará en panel con al menos tres Consejeros o Consejeras Electorales, y deberá atender al proceso siguiente:

- a) **Antes de la entrevista.** Las y los aspirantes deberán presentarse por lo menos 30 minutos previos a la hora de inicio de la entrevista.
- b) **Durante la entrevista.** Se conforma de tres etapas: apertura, desarrollo y cierre; tendrá una duración de hasta 20 minutos.
- c) **Después de la entrevista.** Al finalizar el proceso de entrevista, cada Consejera o Consejero Electoral deberá asentar el valor cuantificable de cada uno de los rubros que conforman la cédula de valoración curricular y entrevista.

Excepcionalmente, previa causa justificada, las entrevistas podrán llevarse a cabo de manera virtual mediante el uso de tecnologías de la información.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Las y los Consejeros Electorales del Consejo General podrán utilizar cualquier documento, insumo o herramienta que coadyuve a la realización de la entrevista.

En atención al principio de máxima publicidad, las cédulas de los aspirantes se harán públicas en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

OCTAVA. Integración de las listas de candidatas y candidatos

Conforme a lo previsto en los artículos 100, párrafos 1 y 3 y 101, párrafos 1, inciso f), 3 y 4 de la Ley General y 24, párrafo 1, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, la Comisión de Vinculación presentará al Consejo General una lista con la totalidad de los nombres de las y los candidatos a ocupar el cargo.

La propuesta de la o el candidato deberá contener un dictamen debidamente fundado y motivado, que incluya todas las etapas del proceso de selección, además de los elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad y capacidad para el cargo de la o el aspirante.

Una vez elaborada la propuesta de la o el candidato, respaldada con el dictamen respectivo, la Comisión de Vinculación deberá someterla a la consideración del Consejo General con una anticipación no menor a setenta y dos horas previas a la sesión que corresponda.

NOVENA. Designaciones

El Consejo General designará a más tardar el día **1 de noviembre de 2018**, por mayoría de ocho votos, a las Consejeras o Consejeros Electorales que iniciarán el encargo de siete años en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, especificando, en su caso, el periodo o la conclusión del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, párrafo 1, incisos a), g) y jj), de la Ley General, y del Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

La fecha mencionada en el párrafo anterior será tomada como base para determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Base Tercera, párrafos 3 y 4 de la presente Convocatoria.

Con base en los artículos 24, párrafo 9, y 27 párrafo 4 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, en la designación de las o los Consejeros Electorales correspondientes, se procurará observar el principio de paridad de género considerando la integración del órgano superior de dirección del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.

El Consejo General deberá ordenar la publicación del acuerdo de designación en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del estado de Hidalgo, así como comunicar a las autoridades locales la designación. Asimismo, ordenará a la Secretaría Ejecutiva notificar el acuerdo respectivo a la o el ciudadano designado.

La ciudadana o el ciudadano que haya sido designado como Consejera o Consejero Electoral, deberá acreditar o manifestar bajo protesta de decir verdad, dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación del Acuerdo de designación, que no desempeña ningún empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos relacionados con actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia no remunerados.

La lista que contenga el nombre de las Consejeras o Consejeros Electorales designados será publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

DÉCIMA. Nombramiento y toma de protesta

Las o los ciudadanos que hayan sido designados recibirán el nombramiento que lo acredita como Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo; mismo que contendrá, entre otras cosas el nombre y apellidos, cargo, periodo y fecha de expedición.

Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados rendirán protesta en la fecha que determine el acuerdo de designación que apruebe el Consejo General. Se rendirá protesta en la sede del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y deberá incluirse el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución Política del estado y las leyes que de ellas emanen, así como el apego a los principios rectores de la función electoral.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados no podrán ser reelectos, acorde a lo establecido en el artículo 116, base IV, inciso c), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DÉCIMA PRIMERA. Transparencia

El resultado de cada una de las etapas deberá hacerse público a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y por los demás medios que determine la Comisión de Vinculación, en los términos establecidos para cada etapa en la presente Convocatoria.

La información y documentación que integre los expedientes individuales de las y los aspirantes será confidencial en términos de lo establecido en el artículo 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que no podrá tener otro fin que el previsto en el proceso objeto de la presente Convocatoria, ni ser utilizada o difundida salvo que medie el consentimiento expreso del titular conforme al Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En atención al principio de máxima publicidad, el Instituto realizará la publicación de la información más relevante de cada aspirante, utilizando para este propósito la que se encuentra contenida en el resumen curricular, entregada por cada aspirante al momento de su registro.

DÉCIMA SEGUNDA. Casos no previstos

Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la Comisión de Vinculación, con base en lo dispuesto en el Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

Para mayores informes favor de comunicarse a los teléfonos:

Junta Local Ejecutiva (01-771) 717-27-00

Junta Distrital 01 (01-789) 896-05-77

Junta Distrital 03 (01-772) 728-14-60

Junta Distrital 05 (01-55) 56-28-42-00
Ext. 130501 y 130502

Junta Distrital 07 (01-791) 913-65-21

Junta Distrital 02 (01-759) 723-28-08

Junta Distrital 04 (01-775) 754-30-48

Junta Distrital 06 (01-771) 718-49-29

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero y 41, Base V, apartado C, último párrafo; 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo 1, inciso d); 4, párrafo 2; 6, párrafo 2; 29, párrafo 1; 30, párrafo 2; 31, párrafos 1 y 4; 32, párrafo 2, inciso b); 39, párrafo 2; 42, párrafos 5, 6, 8 y 10; 43; 44, párrafo 1, incisos a), g) y jj); 45, párrafo 1, inciso a); 46, párrafo 1, inciso k); 60 inciso e); 99, párrafo 1; 100 y 101, de la Ley General; 73, inciso i) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

CONVOCA:

A las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 100, párrafos 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante Ley General); y artículo 9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, y deseen participar en el proceso de selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, a solicitar su registro y presentar su documentación de aspirante conforme a las siguientes:

BASES:

PRIMERA. Aspectos generales

Las y los aspirantes interesados en participar en el proceso de selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, deberán llenar los formatos que para tal efecto se pondrán a disposición en el portal del Instituto www.ine.mx, desde el **23 de julio al 17 de agosto 2018**.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Una vez requisitados los formatos, deberán imprimirse, **verificar que la información capturada se encuentre completa al imprimir el formato** y firmarse. Los formatos tendrán como único propósito recabar la información de las y los aspirantes, por lo que en ningún caso se podrán considerar como una constancia de registro al proceso de selección y designación.

Tanto los formatos como la documentación solicitada en la presente Convocatoria se recibirán del **13 al 17 de agosto de 2018**, en las oficinas de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas o en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).

Quien así lo requiera podrá asistir a las oficinas antes mencionadas para ser auxiliados en el llenado de los formatos.

La recepción de solicitudes debidamente requisitadas se realizará ante los siguientes órganos del Instituto Nacional Electoral:

Secretaría Ejecutiva

Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio A, Planta Alta, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México, C.P. 14610.

Junta Local Ejecutiva

Avenida Country Club No. 39, Colonia Versalles, entre Amapa y Acacia, Tepic, Nayarit, C. P. 63138.

Junta Distrital 01

Calle Guillermo Prieto No. 217 esquina Ayuntamiento, Colonia Nuevo México, Santiago Ixcuintla, Nayarit, C. P. 63340.

Junta Distrital 02

Avenida Country Club No. 94, Colonia Versalles, Tepic, Nayarit, C. P. 63138.

Junta Distrital 03

Carretera Tepic-Puerto Vallarta No. 11, Colonia El Molino, Compostela, Nayarit, C. P. 63705.

Las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 100, párrafo 2 de la Ley General y en el artículo 9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, podrán inscribirse como aspirantes al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit.

De conformidad con el artículo 13, párrafo 4, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, las y los aspirantes que participen en el proceso de selección y designación en todo momento deberán mantener el cumplimiento de requisitos; de no ser así, la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante Comisión de Vinculación), descartará a la o el aspirante que se encuentre en este supuesto en cualquier etapa del proceso.

SEGUNDA. Cargo y periodo a designar.

El proceso de selección tiene como propósito designar a tres Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, que durarán en su encargo siete años, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 101, párrafo 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

TERCERA. Requisitos.

Las y los interesados en ocupar el cargo referido en la Base Segunda deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
2. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente;
3. Tener más de 30 años cumplidos al día de la designación;
4. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel licenciatura;
5. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
6. Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
7. No haber sido registrado como candidata o candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación;

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

8. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación;
9. No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;
10. No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación como de las entidades federativas, ni subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno. No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni Gobernadora o Gobernador, ni Secretaria o Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser Presidenta o Presidente Municipal, Síndico (a) o Regidor (a) o titular de dependencia de los Ayuntamientos; y
11. No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit o de cualquier otra entidad federativa.

CUARTA. Documentación a entregar.

Las y los interesados deberán presentar la siguiente documentación:

1. Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto;
2. Copia certificada del acta de nacimiento;
3. En caso de no ser originario de la entidad federativa correspondiente, deberá presentar una constancia que acredite una residencia efectiva en la entidad de por lo menos cinco años anteriores a la fecha de designación establecida en la Convocatoria; dicha constancia deberá ser expedida por autoridad competente. En su caso, el documento con el que compruebe ubicarse en una excepción por razón de ausencia del país por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
4. Original y copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, para su certificación;
5. Dos fotografías recientes tamaño infantil a color;
6. Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la solicitud con una antigüedad máxima de tres meses;
7. Copia certificada del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha de expedición mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la Convocatoria para la designación;

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

8. Currículum vitae firmado por la o el aspirante a través del formato que para tal efecto estará disponible en el portal del Instituto, el cual deberá contener, entre otros datos: nombre y apellidos completos, domicilio, teléfonos y correo electrónico, estudios realizados, trayectoria laboral, académica, política, docente y profesional, publicaciones, actividad empresarial, cargos de elección popular, organizaciones de cualquier tipo a las que pertenezca y el carácter de su participación, así como el empleo, cargo o comisión que, en su caso, desempeñe al momento del registro;
9. Resumen curricular con una extensión máxima de una cuartilla con letra Arial 12, para su eventual publicación, por lo que no deberá contener datos personales privados. Para lo anterior, deberá emplear el formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto; y
10. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa (empleando el formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto), en la que se manifieste:
 - a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
 - b) No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
 - c) No haber sido registrado como candidata o candidato a cargo alguno de elección popular durante los cuatro años anteriores a la designación;
 - d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación;
 - e) No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;
 - f) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno federal o de las entidades federativas, ni subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno;
 - g) No ser jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni gobernadora o gobernador, ni secretaria o secretario de gobierno o su equivalente a nivel local;
 - h) No ser jefe o jefa delegacional, presidenta o presidente municipal, síndica o síndico o regidora o regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos;
 - i) No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit o de cualquier otra entidad federativa;

- j) La aceptación de dar por concluido todo empleo, cargo o comisión en caso de ser designado como Consejera o Consejero Presidente;
- k) Toda la información que, con motivo del proceso de selección a que se refiere la Convocatoria, ha proporcionado o llegue a proporcionar es veraz y toda la documentación que ha entregado o llegue a entregar es auténtica;
- l) La aceptación de sujetarse a la Convocatoria y a las reglas establecidas en el presente proceso de selección; y
- m) Consentimiento para que sus datos personales sean utilizados únicamente para los fines de la convocatoria.

Los formatos para la presentación de los requisitos establecidos en los párrafos 1, 8, 9 y 10, estarán disponibles en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en las oficinas del Instituto Nacional Electoral.

Si fuera el caso de que las y los interesados, con motivo de alguna convocatoria anterior hubieran presentado al Instituto Nacional Electoral copia certificada del acta de nacimiento; del título o cédula profesional de nivel licenciatura y los mismos obraran en los archivos del Instituto, deberán hacerlo del conocimiento en su solicitud de registro de la presente Convocatoria, los cuales se ubicarán en una situación de excepción para exhibirlos, una vez que la autoridad nacional electoral verifique su resguardo documental.

De ser el caso que la solicitud de la o el aspirante se realice el día 17 de agosto de 2018, la Unidad Técnica contará con el término de veinticuatro horas para verificar en sus archivos la existencia de dichos documentos, y en caso de que no cuente con ellos, requerirá a la o el aspirante para que dentro del término de cuarenta y ocho horas los remita digitalizados a través de correo electrónico y de igual forma en forma física, a través de la Junta Local o Distrital de su entidad federativa.

QUINTA. Plazos y horarios para el registro

Las y los aspirantes deberán presentar los formatos referidos en las Bases Primera y Cuarta para solicitar su registro del **13 al 17 de agosto de 2018**, en la Secretaría Ejecutiva, en la Junta Local Ejecutiva o en las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral correspondientes al estado de Nayarit, en los domicilios

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

citados en la Base Primera de la presente Convocatoria, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).

SEXTA. Notificaciones.

Todas las notificaciones se harán mediante el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, salvo aquéllas que deban realizarse de manera personal a las y los aspirantes, mismas que se harán mediante el correo electrónico que hayan registrado y que deberán ser acusadas de recibido por los aspirantes de forma inmediata a su recepción, en el entendido de que quienes no lo hagan dentro de las veinticuatro horas posteriores a su envío, se darán por debidamente notificados.

Las ciudadanas o ciudadanos designados por el Consejo General serán notificados en los términos del artículo 24, párrafo 7, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

SÉPTIMA. Etapas del proceso de selección y designación.

El proceso de selección de las Consejeras o Consejeros Electorales del órgano superior de dirección del Instituto Estatal Electoral de Nayarit se desarrollará de conformidad con las siguientes etapas:

1. Registro de aspirantes. Las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en el estado de Nayarit, así como la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral recibirán, en las fechas establecidas en la Base Quinta de la presente Convocatoria, las solicitudes y la documentación que presenten las y los aspirantes o por persona autorizada por escrito, siempre y cuando en la solicitud aparezca la firma autógrafa de dichos aspirantes para ocupar el cargo convocado. Cada órgano receptor será el responsable de concentrar las solicitudes y documentación correspondiente para la integración de los expedientes.

En las sedes de las Juntas Local y Distritales del estado de Nayarit, así como de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, se proporcionará el apoyo necesario para llevar a cabo el registro en el sistema habilitado para la presente Convocatoria.

Al momento de presentar la solicitud de registro y entregar la documentación correspondiente, las y los aspirantes recibirán un acuse con un folio asignado y la descripción de la información y documentación entregada al Instituto, el cual

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

deberán firmar de conformidad. El mencionado comprobante tendrá como único propósito acusar de recibida la documentación ahí referida, por lo que en ningún caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos de esta Convocatoria.

La Junta Local Ejecutiva será la responsable de concentrar los expedientes de las y los aspirantes que se presenten ante la misma y ante las Juntas Distritales Ejecutivas, elaborando una lista de aquéllos que presentaron su solicitud, señalando las inconsistencias u omisiones en los documentos presentados, las cuales serán puestas a consideración de la Comisión de Vinculación.

A más tardar el **20 de agosto de 2018**, la Junta Local Ejecutiva remitirá los expedientes a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante Unidad de Vinculación) para que ésta los entregue tanto en físico como en versión electrónica al Presidente de la Comisión de Vinculación. Al resto de las y los Consejeros del Consejo General se les entregará una copia en medio electrónico.

Los expedientes originales estarán bajo resguardo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación, quien los pondrá a disposición para consulta de las y los integrantes del Consejo General y de la propia Comisión.

La Secretaría Ejecutiva y las Juntas Local y Distritales no podrán descartar o rechazar solicitud alguna que se les presente. En caso de que algún aspirante no entregue la totalidad de la documentación, podrá subsanar la omisión siempre y cuando se encuentre dentro del periodo de registro establecido en la presente Convocatoria o a solicitud expresa de la Unidad de Vinculación.

2. Verificación de los requisitos legales. La Comisión de Vinculación, con el apoyo de los grupos de trabajo que en su caso se conformen, verificará el cumplimiento de los requisitos legales, y aprobará, a más tardar el **28 de agosto de 2018**, el Acuerdo que contenga la relación con los nombres y apellidos de las y los aspirantes que cumplen con todos los requisitos y ordenará su publicación, agregando el resumen curricular de cada uno de los aspirantes.

En el mismo Acuerdo, la Comisión de Vinculación aprobará la sede y horario en que se aplicará el examen de conocimientos.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

La Unidad de Vinculación publicará la guía de estudio y las condiciones del examen de conocimientos, en la misma fecha en la que se habiliten los formatos de registro de aspirantes en la página del Instituto; es decir, el **23 de julio**.

La información prevista en los párrafos anteriores deberá ser publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas en el estado de Nayarit.

3. Examen de conocimientos. Las y los aspirantes que hayan cumplido con todos los requisitos legales serán convocados a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, para presentar el examen de conocimientos, mismo que tendrá verificativo el día **1 de septiembre de 2018**, en la sede previamente definida y publicada en el portal del Instituto por la Unidad de Vinculación. La fecha para la presentación del examen será inamovible, por lo que no podrá aplicarse en otra diversa, por ninguna causa.

El examen comprenderá dos apartados: el primero, de competencias básicas, que comprende las áreas comunicativa y matemática, el cual tendrá una ponderación en la calificación de 40%. El segundo será de conocimientos técnicos, y comprenderá las áreas teórico-normativa y de procedimientos electorales, el cual tendrá una ponderación en la calificación de 60%.

La estructura y el contenido del examen de conocimientos serán debidamente establecidos en la guía de estudios que se publicará en la página del Instituto.

Las y los aspirantes deberán identificarse con credencial para votar o identificación oficial con fotografía vigente. La aplicación y evaluación del examen de conocimientos estará a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).

La Comisión de Vinculación solicitará al Ceneval que la entrega de los resultados se realice con listas diferenciadas de mujeres y hombres, en orden de mayor a menor calificación. De tal manera que pasarán a la siguiente etapa 12 aspirantes mujeres y 12 aspirantes hombres que obtengan la mejor calificación, siempre y cuando ésta sea igual o mayor a seis. En caso de empate en la posición número 12, accederán las y los aspirantes que se encuentren en este supuesto.

Los resultados del examen de conocimientos se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día **13 de septiembre de 2018**,

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

ordenados de mayor a menor calificación y diferenciando las listas de la forma siguiente:

- a) Nombre de las aspirantes que acceden a la siguiente etapa;
- b) Nombre de los aspirantes que acceden a la siguiente etapa; y
- c) Folios de las y los aspirantes que no pasan a la siguiente etapa.

A partir de dicha publicación, las y los aspirantes que no hubiesen accedido a la siguiente etapa, tendrán hasta el día **17 de septiembre de 2018** para en su caso, solicitar por escrito al correo electrónico revisiones.utvopl@ine.mx o ante la Unidad de Vinculación, la revisión del examen, misma que tendrá verificativo a partir del día **18 de septiembre de 2018**. La Unidad de Vinculación notificará a las y los solicitantes a través del correo electrónico que hayan proporcionado, la fecha, hora y lugar para la realización de la sesión de revisión. En todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la Ciudad de México.

Para la revisión del examen, se llevará a cabo una sesión por cada solicitante y a la misma acudirán personalmente la o el aspirante, un representante de Ceneval, y un representante de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación o la o el funcionario que ésta designe, quien levantará un acta de revisión de examen que deberá ser firmada por quienes intervengan en dicho acto. Para el desahogo de dicha sesión, la Institución evaluadora del examen proporcionará a la Secretaría Técnica todos los elementos necesarios para salvaguardar el derecho de audiencia y debido proceso del solicitante.

Si los resultados de la revisión realizada determinan que la o el sustentante obtuvo una calificación igual o superior a la posición 12, la Comisión de Vinculación ordenará su inclusión en la siguiente etapa, sin perjuicio de las y los aspirantes ya incluidos en las listas publicadas.

Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

4. Ensayo presencial. Las y los aspirantes que acrediten la etapa del examen de conocimientos, presentarán un ensayo de manera presencial, el **22 de septiembre de 2018**.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

El Consejo General aprobará los lineamientos que establezcan lo siguiente:

- a) La institución de educación superior, de investigación o evaluación responsable de la aplicación y calificación de los ensayos presenciales;
- b) Criterios para la elaboración y dictamen de los ensayos presenciales;
- c) Requisitos formales para la aplicación del ensayo; y
- d) Fecha de entrega de resultados por parte de la institución educativa designada.

Los lineamientos aprobados serán notificados a las y los aspirantes, así como las sedes y horarios de aplicación, a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. La fecha para la elaboración del ensayo será inamovible, por lo que no podrá presentarse en otra fecha, bajo ningún motivo.

A través de la elaboración y presentación del ensayo, las y los aspirantes serán evaluados sobre la habilidad que posean para definir, situar y delimitar un problema del ámbito electoral, a partir de la delimitación y contextualización de un problema central, de la identificación de los actores relevantes y los escenarios posibles, analizar los riesgos y oportunidades, para desarrollar propuesta operativas a efecto de gestionar o resolver los problemas identificados; no así sobre su postura u opinión particular con respecto al tema desarrollado. De esta manera, el ensayo permitirá calificar la capacidad de análisis, el desarrollo argumentativo, el planteamiento del problema y el desarrollo de escenarios y posibles soluciones, con el objeto de establecer una estrategia y una ruta crítica de acción con base en las atribuciones y competencias legales de los Organismos Públicos Locales.

La aplicación de los ensayos y su dictamen estará a cargo de la institución designada, que determinará quiénes son las y los aspirantes cuyo ensayo sea dictaminado como idóneo. Los ensayos serán evaluados por tres académicos que determine la propia institución y será idóneo el ensayo de la o el aspirante que obtenga al menos dos dictámenes favorables.

La institución designada entregará los tres dictámenes de cada uno de las y los aspirantes a la Comisión de Vinculación, a través de la Unidad de Vinculación a más tardar el día **11 de octubre de 2018**.

Los resultados del ensayo se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día **11 de octubre de 2018**, en listas diferenciadas, de acuerdo con lo siguiente:

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

- a) Nombre de las aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
- b) Nombre de los aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
- c) Folios de las y los aspirantes con dictamen de ensayo no idóneo.

Una vez que se tenga la lista de las y los aspirantes que hayan resultado con dictamen idóneo en el ensayo, la Comisión de Vinculación la hará de conocimiento público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y la notificará a las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, quienes podrán presentar por escrito, dentro de los cinco días hábiles siguientes, ante la misma Comisión, las observaciones y comentarios que consideren convenientes respecto de cada una de las y los aspirantes; el escrito deberá acompañarse de los elementos objetivos que sustenten o corroboren sus afirmaciones.

A partir de dicha publicación, aquellos aspirantes cuyo ensayo haya sido dictaminado como no idóneo, tendrán derecho a solicitar por escrito, hasta el día **15 de octubre de 2018**, su revisión ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Nayarit o directamente ante la Unidad de Vinculación. La diligencia de revisión de ensayo deberá efectuarse a partir del día **16 de octubre de 2018**. En todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la Ciudad de México.

Si los resultados de la revisión realizada arrojan que el ensayo de la o el aspirante obtuvo un dictamen idóneo, la Comisión de Vinculación lo hará del conocimiento de las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para que en un término de dos días hábiles emitan las observaciones a que haya lugar en los términos precitados.

Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

Concluido el plazo de observaciones de las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, la Comisión de Vinculación hará del conocimiento público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, la relación de quienes, al no tener algún impedimento legal y habiendo aprobado las etapas anteriores, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista, conforme al calendario que apruebe la Comisión de Vinculación para tal efecto.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

5. Valoración curricular y entrevista. Para los efectos de esta Convocatoria, la valoración curricular y la entrevista serán consideradas una misma etapa.

Las y los aspirantes cuyo ensayo resulte idóneo y se considere que no existen elementos objetivos aportados por las y los representantes de los partidos políticos o por Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para descalificarlos como aspirantes, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista.

El Consejo General, a propuesta de la Comisión de Vinculación, aprobará los criterios para realizar la valoración curricular y la entrevista, los que deberán considerar al menos lo siguiente:

- a) Propósito;
- b) Responsables de conducir las entrevistas;
- c) Procedimiento para la calificación;
- d) Las competencias a valorar;
- e) Ponderación que se utilizará para la calificación;
- f) Instrumento que se utilizará para la calificación.

Los criterios que apruebe el Consejo General serán notificados a las y los aspirantes a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx

Esta etapa estará a cargo de las y los Consejeros Electorales del Instituto, los cuales conformarán grupos de entrevistadores.

Al efecto, se procurará un equilibrio entre géneros en la conformación de las listas de las y los aspirantes que accedan a dicha etapa, para lo cual, la Comisión de Vinculación integrará las listas diferenciadas de hombres y mujeres cuyo ensayo presencial haya sido dictaminado como idóneo.

Las entrevistas se realizarán conforme al calendario y sedes que previamente apruebe la Comisión de Vinculación. La información sobre el calendario y la sede se publicará en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. Asimismo, se notificará a las y los aspirantes al correo electrónico proporcionado por los mismos, debiendo acusar de recibida dicha actuación. De la misma forma, se publicará en los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en el estado de Nayarit.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Las entrevistas serán transmitidas en tiempo real en el portal del Instituto www.ine.mx, serán grabadas en video y estarán disponibles en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral.

En la etapa de valoración curricular y entrevista se identificará que el perfil de las y los aspirantes se apegue a los principios rectores de la función electoral y cuente con las competencias indispensables para determinar la idoneidad de las y los aspirantes para el desempeño del cargo.

La entrevista será presencial, se realizará en panel con al menos tres Consejeros o Consejeras Electorales, y deberá atender al proceso siguiente:

- a) **Antes de la entrevista.** Las y los aspirantes deberán presentarse por lo menos 30 minutos previos a la hora de inicio de la entrevista.
- b) **Durante la entrevista.** Se conforma de tres etapas: apertura, desarrollo y cierre; tendrá una duración de hasta 20 minutos.
- c) **Después de la entrevista.** Al finalizar el proceso de entrevista, cada Consejera o Consejero Electoral deberá asentar el valor cuantificable de cada uno de los rubros que conforman la cédula de valoración curricular y entrevista.

Excepcionalmente, previa causa justificada, las entrevistas podrán llevarse a cabo de manera virtual mediante el uso de tecnologías de la información.

Las y los Consejeros Electorales del Consejo General podrán utilizar cualquier documento, insumo o herramienta que coadyuve a la realización de la entrevista.

En atención al principio de máxima publicidad, las cédulas de los aspirantes se harán públicas en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

OCTAVA. Integración de las listas de candidatas y candidatos

Conforme a lo previsto en los artículos 100, párrafos 1 y 3 y 101, párrafos 1, inciso f), 3 y 4 de la Ley General y 24, párrafo 1, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, la Comisión de Vinculación presentará al Consejo General una lista con la totalidad de los nombres de las y los candidatos a ocupar el cargo.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

La propuesta de la o el candidato deberá contener un dictamen debidamente fundado y motivado, que incluya todas las etapas del proceso de selección, además de los elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad y capacidad para el cargo de la o el aspirante.

Una vez elaborada la propuesta de la o el candidato, respaldada con el dictamen respectivo, la Comisión de Vinculación deberá someterla a la consideración del Consejo General con una anticipación no menor a setenta y dos horas previas a la sesión que corresponda.

NOVENA. Designaciones

El Consejo General designará a más tardar el día **1 de noviembre de 2018**, por mayoría de ocho votos, a las Consejeras o Consejeros Electorales que iniciarán el encargo de siete años en el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, especificando, en su caso, el periodo o la conclusión del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, párrafo 1, incisos a), g) y jj), de la Ley General, y del Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

La fecha mencionada en el párrafo anterior será tomada como base para determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Base Tercera, párrafos 3 y 4 de la presente Convocatoria.

Con base en los artículos 24, párrafo 9, y 27 párrafo 4 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, en la designación de las o los Consejeros Electorales correspondientes, se procurará observar el principio de paridad de género considerando la integración del órgano superior de dirección del Instituto Estatal Electoral de Nayarit.

El Consejo General deberá ordenar la publicación del acuerdo de designación en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del estado de Nayarit, así como comunicar a las autoridades locales la designación. Asimismo, ordenará a la Secretaría Ejecutiva notificar el acuerdo respectivo a la o el ciudadano designado.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

La ciudadana o el ciudadano que haya sido designado como Consejera o Consejero Electoral, deberá acreditar o manifestar bajo protesta de decir verdad, dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación del Acuerdo de designación, que no desempeña ningún empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos relacionados con actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia no remunerados.

La lista que contenga el nombre de las Consejeras o Consejeros Electorales designados será publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

DÉCIMA. Nombramiento y toma de protesta

Las o los ciudadanos que hayan sido designados recibirán el nombramiento que lo acredita como Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit; mismo que contendrá, entre otras cosas el nombre y apellidos, cargo, periodo y fecha de expedición.

Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados rendirán protesta en la fecha que determine el acuerdo de designación que apruebe el Consejo General. Se rendirá protesta en la sede del Instituto Estatal Electoral de Nayarit y deberá incluirse el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución Política del estado y las leyes que de ellas emanen, así como el apego a los principios rectores de la función electoral.

Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados no podrán ser reelectos, acorde a lo establecido en el artículo 116, base IV, inciso c), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DÉCIMA PRIMERA. Transparencia

El resultado de cada una de las etapas deberá hacerse público a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y por los demás medios que determine la Comisión de Vinculación, en los términos establecidos para cada etapa en la presente Convocatoria.

La información y documentación que integre los expedientes individuales de las y los aspirantes será confidencial en términos de lo establecido en el artículo 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que no podrá tener otro fin que el previsto en el proceso objeto de la presente Convocatoria, ni ser utilizada o difundida salvo que medie el

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

consentimiento expreso del titular conforme al Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En atención al principio de máxima publicidad, el Instituto realizará la publicación de la información más relevante de cada aspirante, utilizando para este propósito la que se encuentra contenida en el resumen curricular, entregada por cada aspirante al momento de su registro.

DÉCIMA SEGUNDA. Casos no previstos

Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la Comisión de Vinculación, con base en lo dispuesto en el Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

Para mayores informes favor de comunicarse a los teléfonos:

Junta Local Ejecutiva	(01-311) 211-87-30 / (01-311) 211-87-31	
Junta Distrital 01	(01-323) 235-13-93 / (01-323) 235-18-22	Junta Distrital 02 (01-311) 214-86-39 / (01-311) 214-86-43
Junta Distrital 03	(01-327) 277-14-35 / (01-327) 277-06-20	

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero y 41, Base V, apartado C, último párrafo; 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo 1, inciso d); 4, párrafo 2; 6, párrafo 2; 29, párrafo 1; 30, párrafo 2; 31, párrafos 1 y 4; 32, párrafo 2, inciso b); 39, párrafo 2; 42, párrafos 5, 6, 8 y 10; 43; 44, párrafo 1, incisos a), g) y jj); 45, párrafo 1, inciso a); 46, párrafo 1, inciso k); 60 inciso e); 99, párrafo 1; 100 y 101, de la Ley General; 73, inciso i) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

CONVOCA:

A las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 100, párrafos 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante Ley General); y artículo 9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, y deseen participar en el proceso de selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral del Estado de Puebla, a solicitar su registro y presentar su documentación de aspirante conforme a las siguientes:

BASES:

PRIMERA. Aspectos generales

Las y los aspirantes interesados en participar en el proceso de selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral del Estado de Puebla, deberán llenar los formatos que para tal efecto se pondrán a disposición en el portal del Instituto www.ine.mx, desde el **23 de julio al 17 de agosto 2018**.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Una vez requisitados los formatos, deberán imprimirse, **verificar que la información capturada se encuentre completa al imprimir el formato** y firmarse. Los formatos tendrán como único propósito recabar la información de las y los aspirantes, por lo que en ningún caso se podrán considerar como una constancia de registro al proceso de selección y designación.

Tanto los formatos como la documentación solicitada en la presente Convocatoria se recibirán del **13 al 17 de agosto de 2018**, en las oficinas de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas o en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).

Quien así lo requiera podrá asistir a las oficinas antes mencionadas para ser auxiliados en el llenado de los formatos.

La recepción de solicitudes debidamente requisitadas se realizará ante los siguientes órganos del Instituto Nacional Electoral:

Secretaría Ejecutiva

Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio A, Planta Alta, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México, C.P. 14610.

Junta Local Ejecutiva

35 Oriente No. 5, Colonia Huexotitla, Puebla, Puebla, C. P. 72534.

Junta Distrital 01

Boulevard 18 de Marzo No. 34, Colonia El Paraíso, Huauchinango, Puebla, C. P. 73160.

Junta Distrital 02

Privada de Leandro Valle No. 37, Colonia Linda Vista, Zacatlán, Puebla, C. P. 73310.

Junta Distrital 03

Avenida Hidalgo No. 409, Colonia Centro, Teziutlán, Puebla, C. P. 73800.

Junta Distrital 04

Calle 2 Poniente No. 616, Colonia Centro, Ajalpan, Puebla, C. P. 75910.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Junta Distrital 05

Zaragoza Norte No. 303, Colonia Centro, San Martín Texmelucan, Puebla, C. P. 74000.

Junta Distrital 06

Boulevard 18 de Noviembre No. 31, Colonia Unidad, Satélite Magisterial, Puebla, Puebla, C. P. 72320.

Junta Distrital 07

Avenida 9 Poniente. No. 301, Colonia Centro, Tepeaca, Puebla, C. P. 75200.

Junta Distrital 08

Avenida Revolución No.14, Colonia Centro, Ciudad Serdán, Puebla, C. P. 75520.

Junta Distrital 09

Boulevard Atlixco No. 71, Colonia La Paz, Puebla, Puebla, C. P. 72160.

Junta Distrital 10

Avenida 9 Poniente No. 505, Barrio de Santa María Xixitla, San Pedro Cholula, Puebla, C. P. 72760.

Junta Distrital 11

Venustiano Carranza No. 101, Colonia Segunda, Ampliación Guadalupe Hidalgo, Puebla, Puebla, C. P. 72490.

Junta Distrital 12

Privada 8 "A" Sur No. 3502, Fracc. Anzures, Puebla, Puebla, C. P. 72530.

Junta Distrital 13

Prol. Nardo No. 1410, Colonia Vista Hermosa, Atlixco, Puebla, C. P. 74218.

Junta Distrital 14

Calle Lázaro Cárdenas No. 84, Colonia Barrio la Palma, Acatlán de Osorio, Puebla, C. P. 74949.

Junta Distrital 15

Boulevard Aldama No. 2002, Fraccionamiento Arcadia, Tehuacán, Puebla, C. P. 75760.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 100, párrafo 2 de la Ley General y en el artículo 9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, podrán inscribirse como aspirantes al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral del Estado de Puebla.

De conformidad con el artículo 13, párrafo 4, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, las y los aspirantes que participen en el proceso de selección y designación en todo momento deberán mantener el cumplimiento de requisitos; de no ser así, la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante Comisión de Vinculación), descartará a la o el aspirante que se encuentre en este supuesto en cualquier etapa del proceso.

SEGUNDA. Cargo y periodo a designar.

El proceso de selección tiene como propósito designar a tres Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto Electoral del Estado de Puebla, que durarán en su encargo siete años, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 101, párrafo 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

TERCERA. Requisitos.

Las y los interesados en ocupar el cargo referido en la Base Segunda deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
2. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente;
3. Tener más de 30 años cumplidos al día de la designación;
4. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel licenciatura;
5. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
6. Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación,

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

- salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
7. No haber sido registrado como candidata o candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación;
 8. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación;
 9. No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;
 10. No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación como de las entidades federativas, ni subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno. No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni Gobernadora o Gobernador, ni Secretaria o Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser Presidenta o Presidente Municipal, Síndico (a) o Regidor (a) o titular de dependencia de los Ayuntamientos; y
 11. No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral del Estado de Puebla o de cualquier otra entidad federativa.

CUARTA. Documentación a entregar.

Las y los interesados deberán presentar la siguiente documentación:

1. Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto;
2. Copia certificada del acta de nacimiento;
3. En caso de no ser originario de la entidad federativa correspondiente, deberá presentar una constancia que acredite una residencia efectiva en la entidad de por lo menos cinco años anteriores a la fecha de designación establecida en la Convocatoria; dicha constancia deberá ser expedida por autoridad competente. En su caso, el documento con el que compruebe ubicarse en una excepción por razón de ausencia del país por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
4. Original y copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, para su certificación;
5. Dos fotografías recientes tamaño infantil a color;
6. Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la solicitud con una antigüedad máxima de tres meses;

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

7. Copia certificada del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha de expedición mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la Convocatoria para la designación;
8. Currículum vitae firmado por la o el aspirante a través del formato que para tal efecto estará disponible en el portal del Instituto, el cual deberá contener, entre otros datos: nombre y apellidos completos, domicilio, teléfonos y correo electrónico, estudios realizados, trayectoria laboral, académica, política, docente y profesional, publicaciones, actividad empresarial, cargos de elección popular, organizaciones de cualquier tipo a las que pertenezca y el carácter de su participación, así como el empleo, cargo o comisión que, en su caso, desempeñe al momento del registro;
9. Resumen curricular con una extensión máxima de una cuartilla con letra Arial 12, para su eventual publicación, por lo que no deberá contener datos personales privados. Para lo anterior, deberá emplear el formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto; y
10. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa (empleando el formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto), en la que se manifieste:
 - a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
 - b) No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
 - c) No haber sido registrado como candidata o candidato a cargo alguno de elección popular durante los cuatro años anteriores a la designación;
 - d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación;
 - e) No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;
 - f) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno federal o de las entidades federativas, ni subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno;
 - g) No ser jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni gobernadora o gobernador, ni secretaria o secretario de gobierno o su equivalente a nivel local;

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

- h) No ser jefe o jefa delegacional, presidenta o presidente municipal, síndica o síndico o regidora o regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos;
- i) No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral del Estado de Puebla o de cualquier otra entidad federativa;
- j) La aceptación de dar por concluido todo empleo, cargo o comisión en caso de ser designado como Consejera o Consejero Presidente;
- k) Toda la información que, con motivo del proceso de selección a que se refiere la Convocatoria, ha proporcionado o llegue a proporcionar es veraz y toda la documentación que ha entregado o llegue a entregar es auténtica;
- l) La aceptación de sujetarse a la Convocatoria y a las reglas establecidas en el presente proceso de selección; y
- m) Consentimiento para que sus datos personales sean utilizados únicamente para los fines de la convocatoria.

Los formatos para la presentación de los requisitos establecidos en los párrafos 1, 8, 9 y 10, estarán disponibles en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en las oficinas del Instituto Nacional Electoral.

Si fuera el caso de que las y los interesados, con motivo de alguna convocatoria anterior hubieran presentado al Instituto Nacional Electoral copia certificada del acta de nacimiento; del título o cédula profesional de nivel licenciatura y los mismos obraran en los archivos del Instituto, deberán hacerlo del conocimiento en su solicitud de registro de la presente Convocatoria, los cuales se ubicarán en una situación de excepción para exhibirlos, una vez que la autoridad nacional electoral verifique su resguardo documental.

De ser el caso que la solicitud de la o el aspirante se realice el día 17 de agosto de 2018, la Unidad Técnica contará con el término de veinticuatro horas para verificar en sus archivos la existencia de dichos documentos, y en caso de que no cuente con ellos, requerirá a la o el aspirante para que dentro del término de cuarenta y ocho horas los remita digitalizados a través de correo electrónico y de igual forma en forma física, a través de la Junta Local o Distrital de su entidad federativa.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

QUINTA. Plazos y horarios para el registro

Las y los aspirantes deberán presentar los formatos referidos en las Bases Primera y Cuarta para solicitar su registro del **13 al 17 de agosto de 2018**, en la Secretaría Ejecutiva, en la Junta Local Ejecutiva o en las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral correspondientes al estado de Puebla, en los domicilios citados en la Base Primera de la presente Convocatoria, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).

SEXTA. Notificaciones.

Todas las notificaciones se harán mediante el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, salvo aquéllas que deban realizarse de manera personal a las y los aspirantes, mismas que se harán mediante el correo electrónico que hayan registrado y que deberán ser acusadas de recibido por los aspirantes de forma inmediata a su recepción, en el entendido de que quienes no lo hagan dentro de las veinticuatro horas posteriores a su envío, se darán por debidamente notificados.

Las ciudadanas o ciudadanos designados por el Consejo General serán notificados en los términos del artículo 24, párrafo 7, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

SÉPTIMA. Etapas del proceso de selección y designación.

El proceso de selección de las Consejeras o Consejeros Electorales del órgano superior de dirección del Instituto Electoral del Estado de Puebla se desarrollará de conformidad con las siguientes etapas:

1. Registro de aspirantes. Las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en el estado de Puebla, así como la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral recibirán, en las fechas establecidas en la Base Quinta de la presente Convocatoria, las solicitudes y la documentación que presenten las y los aspirantes o por persona autorizada por escrito, siempre y cuando en la solicitud aparezca la firma autógrafa de dichos aspirantes para ocupar el cargo convocado. Cada órgano receptor será el responsable de concentrar las solicitudes y documentación correspondiente para la integración de los expedientes.

En las sedes de las Juntas Local y Distritales del estado de Puebla, así como de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, se proporcionará el apoyo

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

necesario para llevar a cabo el registro en el sistema habilitado para la presente Convocatoria.

Al momento de presentar la solicitud de registro y entregar la documentación correspondiente, las y los aspirantes recibirán un acuse con un folio asignado y la descripción de la información y documentación entregada al Instituto, el cual deberán firmar de conformidad. El mencionado comprobante tendrá como único propósito acusar de recibida la documentación ahí referida, por lo que en ningún caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos de esta Convocatoria.

La Junta Local Ejecutiva será la responsable de concentrar los expedientes de las y los aspirantes que se presenten ante la misma y ante las Juntas Distritales Ejecutivas, elaborando una lista de aquéllos que presentaron su solicitud, señalando las inconsistencias u omisiones en los documentos presentados, las cuales serán puestas a consideración de la Comisión de Vinculación.

A más tardar el **20 de agosto de 2018**, la Junta Local Ejecutiva remitirá los expedientes a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante Unidad de Vinculación) para que ésta los entregue tanto en físico como en versión electrónica al Presidente de la Comisión de Vinculación. Al resto de las y los Consejeros del Consejo General se les entregará una copia en medio electrónico.

Los expedientes originales estarán bajo resguardo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación, quien los pondrá a disposición para consulta de las y los integrantes del Consejo General y de la propia Comisión.

La Secretaría Ejecutiva y las Juntas Local y Distritales no podrán descartar o rechazar solicitud alguna que se les presente. En caso de que algún aspirante no entregue la totalidad de la documentación, podrá subsanar la omisión siempre y cuando se encuentre dentro del periodo de registro establecido en la presente Convocatoria o a solicitud expresa de la Unidad de Vinculación.

2. Verificación de los requisitos legales. La Comisión de Vinculación, con el apoyo de los grupos de trabajo que en su caso se conformen, verificará el cumplimiento de los requisitos legales, y aprobará, a más tardar el **28 de agosto de 2018**, el Acuerdo que contenga la relación con los nombres y apellidos de las y los aspirantes que cumplen con todos los requisitos y ordenará su publicación, agregando el resumen curricular de cada uno de los aspirantes.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

En el mismo Acuerdo, la Comisión de Vinculación aprobará la sede y horario en que se aplicará el examen de conocimientos.

La Unidad de Vinculación publicará la guía de estudio y las condiciones del examen de conocimientos, en la misma fecha en la que se habiliten los formatos de registro de aspirantes en la página del Instituto; es decir, el **23 de julio**.

La información prevista en los párrafos anteriores deberá ser publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas en el estado de Puebla.

3. Examen de conocimientos. Las y los aspirantes que hayan cumplido con todos los requisitos legales serán convocados a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, para presentar el examen de conocimientos, mismo que tendrá verificativo el día **1 de septiembre de 2018**, en la sede previamente definida y publicada en el portal del Instituto por la Unidad de Vinculación. La fecha para la presentación del examen será inamovible, por lo que no podrá aplicarse en otra diversa, por ninguna causa.

El examen comprenderá dos apartados: el primero, de competencias básicas, que comprende las áreas comunicativa y matemática, el cual tendrá una ponderación en la calificación de 40%. El segundo será de conocimientos técnicos, y comprenderá las áreas teórico-normativa y de procedimientos electorales, el cual tendrá una ponderación en la calificación de 60%.

La estructura y el contenido del examen de conocimientos serán debidamente establecidos en la guía de estudios que se publicará en la página del Instituto.

Las y los aspirantes deberán identificarse con credencial para votar o identificación oficial con fotografía vigente. La aplicación y evaluación del examen de conocimientos estará a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).

La Comisión de Vinculación solicitará al Ceneval que la entrega de los resultados se realice con listas diferenciadas de mujeres y hombres, en orden de mayor a menor calificación. De tal manera que pasarán a la siguiente etapa 12 aspirantes mujeres y 12 aspirantes hombres que obtengan la mejor calificación, siempre y cuando ésta sea igual o mayor a seis. En caso de empate en la posición número 12, accederán las y los aspirantes que se encuentren en este supuesto.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Los resultados del examen de conocimientos se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día **13 de septiembre de 2018**, ordenados de mayor a menor calificación y diferenciando las listas de la forma siguiente:

- a) Nombre de las aspirantes que acceden a la siguiente etapa;
- b) Nombre de los aspirantes que acceden a la siguiente etapa; y
- c) Folios de las y los aspirantes que no pasan a la siguiente etapa.

A partir de dicha publicación, las y los aspirantes que no hubiesen accedido a la siguiente etapa, tendrán hasta el día **17 de septiembre de 2018** para en su caso, solicitar por escrito al correo electrónico revisiones.utvopl@ine.mx o ante la Unidad de Vinculación, la revisión del examen, misma que tendrá verificativo a partir del día **18 de septiembre de 2018**. La Unidad de Vinculación notificará a las y los solicitantes a través del correo electrónico que hayan proporcionado, la fecha, hora y lugar para la realización de la sesión de revisión. En todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la Ciudad de México.

Para la revisión del examen, se llevará a cabo una sesión por cada solicitante y a la misma acudirán personalmente la o el aspirante, un representante de Ceneval, y un representante de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación o la o el funcionario que ésta designe, quien levantará un acta de revisión de examen que deberá ser firmada por quienes intervengan en dicho acto. Para el desahogo de dicha sesión, la Institución evaluadora del examen proporcionará a la Secretaría Técnica todos los elementos necesarios para salvaguardar el derecho de audiencia y debido proceso del solicitante.

Si los resultados de la revisión realizada determinan que la o el sustentante obtuvo una calificación igual o superior a la posición 12, la Comisión de Vinculación ordenará su inclusión en la siguiente etapa, sin perjuicio de las y los aspirantes ya incluidos en las listas publicadas.

Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

4. Ensayo presencial. Las y los aspirantes que acrediten la etapa del examen de conocimientos, presentarán un ensayo de manera presencial, el **22 de septiembre de 2018**.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

El Consejo General aprobará los lineamientos que establezcan lo siguiente:

- a) La institución de educación superior, de investigación o evaluación responsable de la aplicación y calificación de los ensayos presenciales;
- b) Criterios para la elaboración y dictamen de los ensayos presenciales;
- c) Requisitos formales para la aplicación del ensayo; y
- d) Fecha de entrega de resultados por parte de la institución educativa designada.

Los lineamientos aprobados serán notificados a las y los aspirantes, así como las sedes y horarios de aplicación, a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. La fecha para la elaboración del ensayo será inamovible, por lo que no podrá presentarse en otra fecha, bajo ningún motivo.

A través de la elaboración y presentación del ensayo, las y los aspirantes serán evaluados sobre la habilidad que posean para definir, situar y delimitar un problema del ámbito electoral, a partir de la delimitación y contextualización de un problema central, de la identificación de los actores relevantes y los escenarios posibles, analizar los riesgos y oportunidades, para desarrollar propuesta operativas a efecto de gestionar o resolver los problemas identificados; no así sobre su postura u opinión particular con respecto al tema desarrollado. De esta manera, el ensayo permitirá calificar la capacidad de análisis, el desarrollo argumentativo, el planteamiento del problema y el desarrollo de escenarios y posibles soluciones, con el objeto de establecer una estrategia y una ruta crítica de acción con base en las atribuciones y competencias legales de los Organismos Públicos Locales.

La aplicación de los ensayos y su dictamen estará a cargo de la institución designada, que determinará quiénes son las y los aspirantes cuyo ensayo sea dictaminado como idóneo. Los ensayos serán evaluados por tres académicos que determine la propia institución y será idóneo el ensayo de la o el aspirante que obtenga al menos dos dictámenes favorables.

La institución designada entregará los tres dictámenes de cada uno de las y los aspirantes a la Comisión de Vinculación, a través de la Unidad de Vinculación a más tardar el día **11 de octubre de 2018**.

Los resultados del ensayo se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día **11 de octubre de 2018**, en listas diferenciadas, de acuerdo con lo siguiente:

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

- a) Nombre de las aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
- b) Nombre de los aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
- c) Folios de las y los aspirantes con dictamen de ensayo no idóneo.

Una vez que se tenga la lista de las y los aspirantes que hayan resultado con dictamen idóneo en el ensayo, la Comisión de Vinculación la hará de conocimiento público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y la notificará a las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, quienes podrán presentar por escrito, dentro de los cinco días hábiles siguientes, ante la misma Comisión, las observaciones y comentarios que consideren convenientes respecto de cada una de las y los aspirantes; el escrito deberá acompañarse de los elementos objetivos que sustenten o corroboren sus afirmaciones.

A partir de dicha publicación, aquellos aspirantes cuyo ensayo haya sido dictaminado como no idóneo, tendrán derecho a solicitar por escrito, hasta el día **15 de octubre de 2018**, su revisión ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Puebla o directamente ante la Unidad de Vinculación. La diligencia de revisión de ensayo deberá efectuarse a partir del día **16 de octubre de 2018**. En todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la Ciudad de México.

Si los resultados de la revisión realizada arrojan que el ensayo de la o el aspirante obtuvo un dictamen idóneo, la Comisión de Vinculación lo hará del conocimiento de las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para que en un término de dos días hábiles emitan las observaciones a que haya lugar en los términos precitados.

Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

Concluido el plazo de observaciones de las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, la Comisión de Vinculación hará del conocimiento público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, la relación de quienes, al no tener algún impedimento legal y habiendo aprobado las etapas anteriores, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista, conforme al calendario que apruebe la Comisión de Vinculación para tal efecto.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

5. Valoración curricular y entrevista. Para los efectos de esta Convocatoria, la valoración curricular y la entrevista serán consideradas una misma etapa.

Las y los aspirantes cuyo ensayo resulte idóneo y se considere que no existen elementos objetivos aportados por las y los representantes de los partidos políticos o por Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para descalificarlos como aspirantes, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista.

El Consejo General, a propuesta de la Comisión de Vinculación, aprobará los criterios para realizar la valoración curricular y la entrevista, los que deberán considerar al menos lo siguiente:

- a) Propósito;
- b) Responsables de conducir las entrevistas;
- c) Procedimiento para la calificación;
- d) Las competencias a valorar;
- e) Ponderación que se utilizará para la calificación;
- f) Instrumento que se utilizará para la calificación.

Los criterios que apruebe el Consejo General serán notificados a las y los aspirantes a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx

Esta etapa estará a cargo de las y los Consejeros Electorales del Instituto, los cuales conformarán grupos de entrevistadores.

Al efecto, se procurará un equilibrio entre géneros en la conformación de las listas de las y los aspirantes que accedan a dicha etapa, para lo cual, la Comisión de Vinculación integrará las listas diferenciadas de hombres y mujeres cuyo ensayo presencial haya sido dictaminado como idóneo.

Las entrevistas se realizarán conforme al calendario y sedes que previamente apruebe la Comisión de Vinculación. La información sobre el calendario y la sede se publicará en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. Asimismo, se notificará a las y los aspirantes al correo electrónico proporcionado por los mismos, debiendo acusar de recibida dicha actuación. De la misma forma, se publicará en los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en el estado de Puebla.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Las entrevistas serán transmitidas en tiempo real en el portal del Instituto www.ine.mx, serán grabadas en video y estarán disponibles en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral.

En la etapa de valoración curricular y entrevista se identificará que el perfil de las y los aspirantes se apegue a los principios rectores de la función electoral y cuente con las competencias indispensables para determinar la idoneidad de las y los aspirantes para el desempeño del cargo.

La entrevista será presencial, se realizará en panel con al menos tres Consejeros o Consejeras Electorales, y deberá atender al proceso siguiente:

- a) **Antes de la entrevista.** Las y los aspirantes deberán presentarse por lo menos 30 minutos previos a la hora de inicio de la entrevista.
- b) **Durante la entrevista.** Se conforma de tres etapas: apertura, desarrollo y cierre; tendrá una duración de hasta 20 minutos.
- c) **Después de la entrevista.** Al finalizar el proceso de entrevista, cada Consejera o Consejero Electoral deberá asentar el valor cuantificable de cada uno de los rubros que conforman la cédula de valoración curricular y entrevista.

Excepcionalmente, previa causa justificada, las entrevistas podrán llevarse a cabo de manera virtual mediante el uso de tecnologías de la información.

Las y los Consejeros Electorales del Consejo General podrán utilizar cualquier documento, insumo o herramienta que coadyuve a la realización de la entrevista.

En atención al principio de máxima publicidad, las cédulas de los aspirantes se harán públicas en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

OCTAVA. Integración de las listas de candidatas y candidatos

Conforme a lo previsto en los artículos 100, párrafos 1 y 3 y 101, párrafos 1, inciso f), 3 y 4 de la Ley General y 24, párrafo 1, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, la Comisión de Vinculación presentará al Consejo General una lista con la totalidad de los nombres de las y los candidatos a ocupar el cargo.

La propuesta de la o el candidato deberá contener un dictamen debidamente fundado y motivado, que incluya todas las etapas del proceso de selección, además

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

de los elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad y capacidad para el cargo de la o el aspirante.

Una vez elaborada la propuesta de la o el candidato, respaldada con el dictamen respectivo, la Comisión de Vinculación deberá someterla a la consideración del Consejo General con una anticipación no menor a setenta y dos horas previas a la sesión que corresponda.

NOVENA. Designaciones

El Consejo General designará a más tardar el día **1 de noviembre de 2018**, por mayoría de ocho votos, a las Consejeras o Consejeros Electorales que iniciarán el encargo de siete años en el Instituto Electoral del Estado de Puebla, especificando, en su caso, el periodo o la conclusión del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, párrafo 1, incisos a), g) y jj), de la Ley General, y del Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

La fecha mencionada en el párrafo anterior será tomada como base para determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Base Tercera, párrafos 3 y 4 de la presente Convocatoria.

Con base en los artículos 24, párrafo 9, y 27 párrafo 4 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, en la designación de las o los Consejeros Electorales correspondientes, se procurará observar el principio de paridad de género considerando la integración del órgano superior de dirección del Instituto Electoral del Estado de Puebla.

El Consejo General deberá ordenar la publicación del acuerdo de designación en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del estado de Puebla, así como comunicar a las autoridades locales la designación. Asimismo, ordenará a la Secretaría Ejecutiva notificar el acuerdo respectivo a la o el ciudadano designado.

La ciudadana o el ciudadano que haya sido designado como Consejera o Consejero Electoral, deberá acreditar o manifestar bajo protesta de decir verdad, dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación del Acuerdo de

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

designación, que no desempeña ningún empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos relacionados con actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia no remunerados.

La lista que contenga el nombre de las Consejeras o Consejeros Electorales designados será publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

DÉCIMA. Nombramiento y toma de protesta

Las o los ciudadanos que hayan sido designados recibirán el nombramiento que lo acredita como Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto Electoral del Estado de Puebla; mismo que contendrá, entre otras cosas el nombre y apellidos, cargo, periodo y fecha de expedición.

Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados rendirán protesta en la fecha que determine el acuerdo de designación que apruebe el Consejo General. Se rendirá protesta en la sede del Instituto Electoral del Estado de Puebla y deberá incluirse el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución Política del estado y las leyes que de ellas emanen, así como el apego a los principios rectores de la función electoral.

Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados no podrán ser reelectos, acorde a lo establecido en el artículo 116, base IV, inciso c), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DÉCIMA PRIMERA. Transparencia

El resultado de cada una de las etapas deberá hacerse público a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y por los demás medios que determine la Comisión de Vinculación, en los términos establecidos para cada etapa en la presente Convocatoria.

La información y documentación que integre los expedientes individuales de las y los aspirantes será confidencial en términos de lo establecido en el artículo 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que no podrá tener otro fin que el previsto en el proceso objeto de la presente Convocatoria, ni ser utilizada o difundida salvo que medie el consentimiento expreso del titular conforme al Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

En atención al principio de máxima publicidad, el Instituto realizará la publicación de la información más relevante de cada aspirante, utilizando para este propósito la que se encuentra contenida en el resumen curricular, entregada por cada aspirante al momento de su registro.

DÉCIMA SEGUNDA. Casos no previstos

Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la Comisión de Vinculación, con base en lo dispuesto en el Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

Para mayores informes favor de comunicarse a los teléfonos:

Junta Local Ejecutiva (01-222) 237-52-36 Ext. 104 / (01-222) 240-31-10 Ext. 108			
Junta Distrital 01	(01-776) 762-18-00 /	Junta Distrital 02	(01-797) 975-21-02 /
	(01-776) 762-19-53		(01-797) 975-21-04
Junta Distrital 03	(01-231) 312-29-75 /	Junta Distrital 04	(01-236) 381 21-88 /
	(01-231) 312-29-85		(01-236) 381-21-74
Junta Distrital 05	(01 248) 484-25-01 /	Junta Distrital 06	(01-222) 213-01-21 /
	(01 248) 484-33-11		(01-222) 236-63-81
Junta Distrital 07	(01-223) 275-20-60 /	Junta Distrital 08	(01-245) 452-10-29 /
	(01-223) 275-13-30		(01-245) 452-04-24
Junta Distrital 09	(01-222) 268-33-16 /	Junta Distrital 10	(01-222) 261-48-43 /
	(01-222) 268-33-18		(01-222) 261-48-41
Junta Distrital 11	(01-222) 211-40-03 /	Junta Distrital 12	(01-222) 237-55-50 /
	(01-222) 211-40-77		(01-222) 237-55-05
Junta Distrital 13	(01-244) 445-48-61 /	Junta Distrital 14	(01-953) 436-14-00 /
	(01-244) 45-29-13		(01-953) 436-05-27
Junta Distrital 15	(01-238) 382-35-97 /		
	(01-238) 382-96-12		

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero y 41, Base V, apartado C, último párrafo; 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo 1, inciso d); 4, párrafo 2; 6, párrafo 2; 29, párrafo 1; 30, párrafo 2; 31, párrafos 1 y 4; 32, párrafo 2, inciso b); 39, párrafo 2; 42, párrafos 5, 6, 8 y 10; 43; 44, párrafo 1, incisos a), g) y jj); 45, párrafo 1, inciso a); 46, párrafo 1, inciso k); 60 inciso e); 99, párrafo 1; 100 y 101, de la Ley General; 73, inciso i) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

CONVOCA:

A las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 100, párrafos 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante Ley General); y artículo 9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, y deseen participar en el proceso de selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo, a solicitar su registro y presentar su documentación de aspirante conforme a las siguientes:

BASES:

PRIMERA. Aspectos generales

Las y los aspirantes interesados en participar en el proceso de selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo, deberán llenar los formatos que para tal efecto se pondrán a disposición en el portal del Instituto www.ine.mx, desde el **23 de julio al 17 de agosto 2018**.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Una vez requisitados los formatos, deberán imprimirse, **verificar que la información capturada se encuentre completa al imprimir el formato** y firmarse. Los formatos tendrán como único propósito recabar la información de las y los aspirantes, por lo que en ningún caso se podrán considerar como una constancia de registro al proceso de selección y designación.

Tanto los formatos como la documentación solicitada en la presente Convocatoria se recibirán del **13 al 17 de agosto de 2018**, en las oficinas de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas o en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).

Quien así lo requiera podrá asistir a las oficinas antes mencionadas para ser auxiliados en el llenado de los formatos.

La recepción de solicitudes debidamente requisitadas se realizará ante los siguientes órganos del Instituto Nacional Electoral:

Secretaría Ejecutiva

Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio A, Planta Alta, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México, C.P. 14610.

Junta Local Ejecutiva

Avenida José Ma. Morelos No. 223 entre las avenidas Venustiano Carranza y Primo de Verdad, Colonia Venustiano Carranza, Municipio de Othón P. Blanco, Chetumal, Quintana Roo, C. P. 77012.

Junta Distrital 01

Avenida 105 Norte, Mza. 022 Lote 001-1 entre 28 Norte y 30 Norte, Colonia Ejidal, Playa del Carmen Solidaridad, Quintana Roo, C. P. 77712.

Junta Distrital 02

Avenida Constituyentes del 74 No. 590 Mza. 314 Lte. 4, Colonia Proterritorio, Chetumal, Quintana Roo, C. P. 77086.

Junta Distrital 03

Avenida Lombardo Toledano, esquina Calle 16 Poniente, Supermanzana 73, Mza. 01 Lote 37-02, Cancún, Quintana Roo, C. P. 77510.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Junta Distrital 04

Avenida Nichupté Lote 1-04, entre Avenida Kinic y Calle México, Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo, C. P. 77534.

Las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 100, párrafo 2 de la Ley General y en el artículo 9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, podrán inscribirse como aspirantes al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo.

De conformidad con el artículo 13, párrafo 4, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, las y los aspirantes que participen en el proceso de selección y designación en todo momento deberán mantener el cumplimiento de requisitos; de no ser así, la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante Comisión de Vinculación), descartará a la o el aspirante que se encuentre en este supuesto en cualquier etapa del proceso.

SEGUNDA. Cargo y periodo a designar.

El proceso de selección tiene como propósito designar a tres Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto Electoral de Quintana Roo, que durarán en su encargo siete años, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 101, párrafo 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

TERCERA. Requisitos.

Las y los interesados en ocupar el cargo referido en la Base Segunda deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
2. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente;
3. Tener más de 30 años cumplidos al día de la designación;
4. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel licenciatura;

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

5. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
6. Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
7. No haber sido registrado como candidata o candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación;
8. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación;
9. No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;
10. No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación como de las entidades federativas, ni subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno. No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni Gobernadora o Gobernador, ni Secretaria o Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser Presidenta o Presidente Municipal, Síndico (a) o Regidor (a) o titular de dependencia de los Ayuntamientos; y
11. No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo o de cualquier otra entidad federativa.

CUARTA. Documentación a entregar.

Las y los interesados deberán presentar la siguiente documentación:

1. Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto;
2. Copia certificada del acta de nacimiento;
3. En caso de no ser originario de la entidad federativa correspondiente, deberá presentar una constancia que acredite una residencia efectiva en la entidad de por lo menos cinco años anteriores a la fecha de designación establecida en la Convocatoria; dicha constancia deberá ser expedida por autoridad competente. En su caso, el documento con el que compruebe ubicarse en una excepción por razón de ausencia del país por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

4. Original y copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, para su certificación;
5. Dos fotografías recientes tamaño infantil a color;
6. Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la solicitud con una antigüedad máxima de tres meses;
7. Copia certificada del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha de expedición mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la Convocatoria para la designación;
8. Currículum vitae firmado por la o el aspirante a través del formato que para tal efecto estará disponible en el portal del Instituto, el cual deberá contener, entre otros datos: nombre y apellidos completos, domicilio, teléfonos y correo electrónico, estudios realizados, trayectoria laboral, académica, política, docente y profesional, publicaciones, actividad empresarial, cargos de elección popular, organizaciones de cualquier tipo a las que pertenezca y el carácter de su participación, así como el empleo, cargo o comisión que, en su caso, desempeñe al momento del registro;
9. Resumen curricular con una extensión máxima de una cuartilla con letra Arial 12, para su eventual publicación, por lo que no deberá contener datos personales privados. Para lo anterior, deberá emplear el formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto; y
10. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa (empleando el formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto), en la que se manifieste:
 - a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
 - b) No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
 - c) No haber sido registrado como candidata o candidato a cargo alguno de elección popular durante los cuatro años anteriores a la designación;
 - d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación;
 - e) No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;
 - f) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno federal o de las entidades federativas, ni subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno;

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

- g) No ser jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni gobernadora o gobernador, ni secretaria o secretario de gobierno o su equivalente a nivel local;
- h) No ser jefe o jefa delegacional, presidenta o presidente municipal, síndica o síndico o regidora o regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos;
- i) No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo o de cualquier otra entidad federativa;
- j) La aceptación de dar por concluido todo empleo, cargo o comisión en caso de ser designado como Consejera o Consejero Presidente;
- k) Toda la información que, con motivo del proceso de selección a que se refiere la Convocatoria, ha proporcionado o llegue a proporcionar es veraz y toda la documentación que ha entregado o llegue a entregar es auténtica;
- l) La aceptación de sujetarse a la Convocatoria y a las reglas establecidas en el presente proceso de selección; y
- m) Consentimiento para que sus datos personales sean utilizados únicamente para los fines de la convocatoria.

Los formatos para la presentación de los requisitos establecidos en los párrafos 1, 8, 9 y 10, estarán disponibles en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en las oficinas del Instituto Nacional Electoral.

Si fuera el caso de que las y los interesados, con motivo de alguna convocatoria anterior hubieran presentado al Instituto Nacional Electoral copia certificada del acta de nacimiento; del título o cédula profesional de nivel licenciatura y los mismos obraran en los archivos del Instituto, deberán hacerlo del conocimiento en su solicitud de registro de la presente Convocatoria, los cuales se ubicarán en una situación de excepción para exhibirlos, una vez que la autoridad nacional electoral verifique su resguardo documental.

De ser el caso que la solicitud de la o el aspirante se realice el día 17 de agosto de 2018, la Unidad Técnica contará con el término de veinticuatro horas para verificar en sus archivos la existencia de dichos documentos, y en caso de que no cuente con ellos, requerirá a la o el aspirante para que dentro del término de cuarenta y ocho horas los remita digitalizados a través de correo electrónico y de igual forma en forma física, a través de la Junta Local o Distrital de su entidad federativa.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

QUINTA. Plazos y horarios para el registro

Las y los aspirantes deberán presentar los formatos referidos en las Bases Primera y Cuarta para solicitar su registro del **13 al 17 de agosto de 2018**, en la Secretaría Ejecutiva, en la Junta Local Ejecutiva o en las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral correspondientes al estado de Quintana Roo, en los domicilios citados en la Base Primera de la presente Convocatoria, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).

SEXTA. Notificaciones.

Todas las notificaciones se harán mediante el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, salvo aquéllas que deban realizarse de manera personal a las y los aspirantes, mismas que se harán mediante el correo electrónico que hayan registrado y que deberán ser acusadas de recibido por los aspirantes de forma inmediata a su recepción, en el entendido de que quienes no lo hagan dentro de las veinticuatro horas posteriores a su envío, se darán por debidamente notificados.

Las ciudadanas o ciudadanos designados por el Consejo General serán notificados en los términos del artículo 24, párrafo 7, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

SÉPTIMA. Etapas del proceso de selección y designación.

El proceso de selección de las Consejeras o Consejeros Electorales del órgano superior de dirección del Instituto Electoral de Quintana Roo se desarrollará de conformidad con las siguientes etapas:

1. Registro de aspirantes. Las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en el estado de Quintana Roo, así como la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral recibirán, en las fechas establecidas en la Base Quinta de la presente Convocatoria, las solicitudes y la documentación que presenten las y los aspirantes o por persona autorizada por escrito, siempre y cuando en la solicitud aparezca la firma autógrafa de dichos aspirantes para ocupar el cargo convocado. Cada órgano receptor será el responsable de concentrar las solicitudes y documentación correspondiente para la integración de los expedientes.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

En las sedes de las Juntas Local y Distritales del estado de Quintana Roo, así como de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, se proporcionará el apoyo necesario para llevar a cabo el registro en el sistema habilitado para la presente Convocatoria.

Al momento de presentar la solicitud de registro y entregar la documentación correspondiente, las y los aspirantes recibirán un acuse con un folio asignado y la descripción de la información y documentación entregada al Instituto, el cual deberán firmar de conformidad. El mencionado comprobante tendrá como único propósito acusar de recibida la documentación ahí referida, por lo que en ningún caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos de esta Convocatoria.

La Junta Local Ejecutiva será la responsable de concentrar los expedientes de las y los aspirantes que se presenten ante la misma y ante las Juntas Distritales Ejecutivas, elaborando una lista de aquéllos que presentaron su solicitud, señalando las inconsistencias u omisiones en los documentos presentados, las cuales serán puestas a consideración de la Comisión de Vinculación.

A más tardar el **20 de agosto de 2018**, la Junta Local Ejecutiva remitirá los expedientes a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante Unidad de Vinculación) para que ésta los entregue tanto en físico como en versión electrónica al Presidente de la Comisión de Vinculación. Al resto de las y los Consejeros del Consejo General se les entregará una copia en medio electrónico.

Los expedientes originales estarán bajo resguardo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación, quien los pondrá a disposición para consulta de las y los integrantes del Consejo General y de la propia Comisión.

La Secretaría Ejecutiva y las Juntas Local y Distritales no podrán descartar o rechazar solicitud alguna que se les presente. En caso de que algún aspirante no entregue la totalidad de la documentación, podrá subsanar la omisión siempre y cuando se encuentre dentro del periodo de registro establecido en la presente Convocatoria o a solicitud expresa de la Unidad de Vinculación.

2. Verificación de los requisitos legales. La Comisión de Vinculación, con el apoyo de los grupos de trabajo que en su caso se conformen, verificará el cumplimiento de los requisitos legales, y aprobará, a más tardar el **28 de agosto de 2018**, el Acuerdo que contenga la relación con los nombres y apellidos de las y los

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

aspirantes que cumplen con todos los requisitos y ordenará su publicación, agregando el resumen curricular de cada uno de los aspirantes.

En el mismo Acuerdo, la Comisión de Vinculación aprobará la sede y horario en que se aplicará el examen de conocimientos.

La Unidad de Vinculación publicará la guía de estudio y las condiciones del examen de conocimientos, en la misma fecha en la que se habiliten los formatos de registro de aspirantes en la página del Instituto; es decir, el **23 de julio**.

La información prevista en los párrafos anteriores deberá ser publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas en el estado de Quintana Roo.

3. Examen de conocimientos. Las y los aspirantes que hayan cumplido con todos los requisitos legales serán convocados a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, para presentar el examen de conocimientos, mismo que tendrá verificativo el día **1 de septiembre de 2018**, en la sede previamente definida y publicada en el portal del Instituto por la Unidad de Vinculación. La fecha para la presentación del examen será inamovible, por lo que no podrá aplicarse en otra diversa, por ninguna causa.

El examen comprenderá dos apartados: el primero, de competencias básicas, que comprende las áreas comunicativa y matemática, el cual tendrá una ponderación en la calificación de 40%. El segundo será de conocimientos técnicos, y comprenderá las áreas teórico-normativa y de procedimientos electorales, el cual tendrá una ponderación en la calificación de 60%.

La estructura y el contenido del examen de conocimientos serán debidamente establecidos en la guía de estudios que se publicará en la página del Instituto.

Las y los aspirantes deberán identificarse con credencial para votar o identificación oficial con fotografía vigente. La aplicación y evaluación del examen de conocimientos estará a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).

La Comisión de Vinculación solicitará al Ceneval que la entrega de los resultados se realice con listas diferenciadas de mujeres y hombres, en orden de mayor a menor calificación. De tal manera que pasarán a la siguiente etapa 12 aspirantes mujeres y 12 aspirantes hombres que obtengan la mejor calificación, siempre y

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

cuando ésta sea igual o mayor a seis. En caso de empate en la posición número 12, accederán las y los aspirantes que se encuentren en este supuesto.

Los resultados del examen de conocimientos se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día **13 de septiembre de 2018**, ordenados de mayor a menor calificación y diferenciando las listas de la forma siguiente:

- a) Nombre de las aspirantes que acceden a la siguiente etapa;
- b) Nombre de los aspirantes que acceden a la siguiente etapa; y
- c) Folios de las y los aspirantes que no pasan a la siguiente etapa.

A partir de dicha publicación, las y los aspirantes que no hubiesen accedido a la siguiente etapa, tendrán hasta el día **17 de septiembre de 2018** para en su caso, solicitar por escrito al correo electrónico revisiones.utvopl@ine.mx o ante la Unidad de Vinculación, la revisión del examen, misma que tendrá verificativo a partir del día **18 de septiembre de 2018**. La Unidad de Vinculación notificará a las y los solicitantes a través del correo electrónico que hayan proporcionado, la fecha, hora y lugar para la realización de la sesión de revisión. En todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la Ciudad de México.

Para la revisión del examen, se llevará a cabo una sesión por cada solicitante y a la misma acudirán personalmente la o el aspirante, un representante de Ceneval, y un representante de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación o la o el funcionario que ésta designe, quien levantará un acta de revisión de examen que deberá ser firmada por quienes intervengan en dicho acto. Para el desahogo de dicha sesión, la Institución evaluadora del examen proporcionará a la Secretaría Técnica todos los elementos necesarios para salvaguardar el derecho de audiencia y debido proceso del solicitante.

Si los resultados de la revisión realizada determinan que la o el sustentante obtuvo una calificación igual o superior a la posición 12, la Comisión de Vinculación ordenará su inclusión en la siguiente etapa, sin perjuicio de las y los aspirantes ya incluidos en las listas publicadas.

Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

4. Ensayo presencial. Las y los aspirantes que acrediten la etapa del examen de conocimientos, presentarán un ensayo de manera presencial, el **22 de septiembre de 2018**.

El Consejo General aprobará los lineamientos que establezcan lo siguiente:

- a) La institución de educación superior, de investigación o evaluación responsable de la aplicación y calificación de los ensayos presenciales;
- b) Criterios para la elaboración y dictamen de los ensayos presenciales;
- c) Requisitos formales para la aplicación del ensayo; y
- d) Fecha de entrega de resultados por parte de la institución educativa designada.

Los lineamientos aprobados serán notificados a las y los aspirantes, así como las sedes y horarios de aplicación, a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. La fecha para la elaboración del ensayo será inamovible, por lo que no podrá presentarse en otra fecha, bajo ningún motivo.

A través de la elaboración y presentación del ensayo, las y los aspirantes serán evaluados sobre la habilidad que posean para definir, situar y delimitar un problema del ámbito electoral, a partir de la delimitación y contextualización de un problema central, de la identificación de los actores relevantes y los escenarios posibles, analizar los riesgos y oportunidades, para desarrollar propuesta operativas a efecto de gestionar o resolver los problemas identificados; no así sobre su postura u opinión particular con respecto al tema desarrollado. De esta manera, el ensayo permitirá calificar la capacidad de análisis, el desarrollo argumentativo, el planteamiento del problema y el desarrollo de escenarios y posibles soluciones, con el objeto de establecer una estrategia y una ruta crítica de acción con base en las atribuciones y competencias legales de los Organismos Públicos Locales.

La aplicación de los ensayos y su dictamen estará a cargo de la institución designada, que determinará quiénes son las y los aspirantes cuyo ensayo sea dictaminado como idóneo. Los ensayos serán evaluados por tres académicos que determine la propia institución y será idóneo el ensayo de la o el aspirante que obtenga al menos dos dictámenes favorables.

La institución designada entregará los tres dictámenes de cada uno de las y los aspirantes a la Comisión de Vinculación, a través de la Unidad de Vinculación a más tardar el día **11 de octubre de 2018**.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Los resultados del ensayo se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día **11 de octubre de 2018**, en listas diferenciadas, de acuerdo con lo siguiente:

- a) Nombre de las aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
- b) Nombre de los aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
- c) Folios de las y los aspirantes con dictamen de ensayo no idóneo.

Una vez que se tenga la lista de las y los aspirantes que hayan resultado con dictamen idóneo en el ensayo, la Comisión de Vinculación la hará de conocimiento público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y la notificará a las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, quienes podrán presentar por escrito, dentro de los cinco días hábiles siguientes, ante la misma Comisión, las observaciones y comentarios que consideren convenientes respecto de cada una de las y los aspirantes; el escrito deberá acompañarse de los elementos objetivos que sustenten o corroboren sus afirmaciones.

A partir de dicha publicación, aquellos aspirantes cuyo ensayo haya sido dictaminado como no idóneo, tendrán derecho a solicitar por escrito, hasta el día **15 de octubre de 2018**, su revisión ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Quintana Roo o directamente ante la Unidad de Vinculación. La diligencia de revisión de ensayo deberá efectuarse a partir del día **16 de octubre de 2018**. En todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la Ciudad de México.

Si los resultados de la revisión realizada arrojan que el ensayo de la o el aspirante obtuvo un dictamen idóneo, la Comisión de Vinculación lo hará del conocimiento de las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para que en un término de dos días hábiles emitan las observaciones a que haya lugar en los términos precitados.

Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

Concluido el plazo de observaciones de las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, la Comisión de Vinculación hará del conocimiento público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, la relación de quienes, al no tener algún impedimento legal y habiendo aprobado las etapas anteriores, pasarán a la etapa

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

de valoración curricular y entrevista, conforme al calendario que apruebe la Comisión de Vinculación para tal efecto.

5. Valoración curricular y entrevista. Para los efectos de esta Convocatoria, la valoración curricular y la entrevista serán consideradas una misma etapa.

Las y los aspirantes cuyo ensayo resulte idóneo y se considere que no existen elementos objetivos aportados por las y los representantes de los partidos políticos o por Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para descalificarlos como aspirantes, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista.

El Consejo General, a propuesta de la Comisión de Vinculación, aprobará los criterios para realizar la valoración curricular y la entrevista, los que deberán considerar al menos lo siguiente:

- a) Propósito;
- b) Responsables de conducir las entrevistas;
- c) Procedimiento para la calificación;
- d) Las competencias a valorar;
- e) Ponderación que se utilizará para la calificación;
- f) Instrumento que se utilizará para la calificación.

Los criterios que apruebe el Consejo General serán notificados a las y los aspirantes a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx

Esta etapa estará a cargo de las y los Consejeros Electorales del Instituto, los cuales conformarán grupos de entrevistadores.

Al efecto, se procurará un equilibrio entre géneros en la conformación de las listas de las y los aspirantes que accedan a dicha etapa, para lo cual, la Comisión de Vinculación integrará las listas diferenciadas de hombres y mujeres cuyo ensayo presencial haya sido dictaminado como idóneo.

Las entrevistas se realizarán conforme al calendario y sedes que previamente apruebe la Comisión de Vinculación. La información sobre el calendario y la sede se publicará en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. Asimismo, se notificará a las y los aspirantes al correo electrónico proporcionado por los mismos, debiendo acusar de recibida dicha actuación. De la misma forma, se publicará en los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en el estado de Quintana Roo.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Las entrevistas serán transmitidas en tiempo real en el portal del Instituto www.ine.mx, serán grabadas en video y estarán disponibles en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral.

En la etapa de valoración curricular y entrevista se identificará que el perfil de las y los aspirantes se apegue a los principios rectores de la función electoral y cuente con las competencias indispensables para determinar la idoneidad de las y los aspirantes para el desempeño del cargo.

La entrevista será presencial, se realizará en panel con al menos tres Consejeros o Consejeras Electorales, y deberá atender al proceso siguiente:

- a) **Antes de la entrevista.** Las y los aspirantes deberán presentarse por lo menos 30 minutos previos a la hora de inicio de la entrevista.
- b) **Durante la entrevista.** Se conforma de tres etapas: apertura, desarrollo y cierre; tendrá una duración de hasta 20 minutos.
- c) **Después de la entrevista.** Al finalizar el proceso de entrevista, cada Consejera o Consejero Electoral deberá asentar el valor cuantificable de cada uno de los rubros que conforman la cédula de valoración curricular y entrevista.

Excepcionalmente, previa causa justificada, las entrevistas podrán llevarse a cabo de manera virtual mediante el uso de tecnologías de la información.

Las y los Consejeros Electorales del Consejo General podrán utilizar cualquier documento, insumo o herramienta que coadyuve a la realización de la entrevista.

En atención al principio de máxima publicidad, las cédulas de los aspirantes se harán públicas en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

OCTAVA. Integración de las listas de candidatas y candidatos

Conforme a lo previsto en los artículos 100, párrafos 1 y 3 y 101, párrafos 1, inciso f), 3 y 4 de la Ley General y 24, párrafo 1, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, la Comisión de Vinculación presentará al Consejo General una lista con la totalidad de los nombres de las y los candidatos a ocupar el cargo.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

La propuesta de la o el candidato deberá contener un dictamen debidamente fundado y motivado, que incluya todas las etapas del proceso de selección, además de los elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad y capacidad para el cargo de la o el aspirante.

Una vez elaborada la propuesta de la o el candidato, respaldada con el dictamen respectivo, la Comisión de Vinculación deberá someterla a la consideración del Consejo General con una anticipación no menor a setenta y dos horas previas a la sesión que corresponda.

NOVENA. Designaciones

El Consejo General designará a más tardar el día **1 de noviembre de 2018**, por mayoría de ocho votos, a las Consejeras o Consejeros Electorales que iniciarán el encargo de siete años en el Instituto Electoral de Quintana Roo, especificando, en su caso, el periodo o la conclusión del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, párrafo 1, incisos a), g) y jj), de la Ley General, y del Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

La fecha mencionada en el párrafo anterior será tomada como base para determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Base Tercera, párrafos 3 y 4 de la presente Convocatoria.

Con base en los artículos 24, párrafo 9, y 27 párrafo 4 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, en la designación de las o los Consejeros Electorales correspondientes, se procurará observar el principio de paridad de género considerando la integración del órgano superior de dirección del Instituto Electoral de Quintana Roo.

El Consejo General deberá ordenar la publicación del acuerdo de designación en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del estado de Quintana Roo, así como comunicar a las autoridades locales la designación. Asimismo, ordenará a la Secretaría Ejecutiva notificar el acuerdo respectivo a la o el ciudadano designado.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

La ciudadana o el ciudadano que haya sido designado como Consejera o Consejero Electoral, deberá acreditar o manifestar bajo protesta de decir verdad, dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación del Acuerdo de designación, que no desempeña ningún empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos relacionados con actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia no remunerados.

La lista que contenga el nombre de las Consejeras o Consejeros Electorales designados será publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

DÉCIMA. Nombramiento y toma de protesta

Las o los ciudadanos que hayan sido designados recibirán el nombramiento que lo acredita como Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto Electoral de Quintana Roo; mismo que contendrá, entre otras cosas el nombre y apellidos, cargo, periodo y fecha de expedición.

Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados rendirán protesta en la fecha que determine el acuerdo de designación que apruebe el Consejo General. Se rendirá protesta en la sede del Instituto Electoral de Quintana Roo y deberá incluirse el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución Política del estado y las leyes que de ellas emanen, así como el apego a los principios rectores de la función electoral.

Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados no podrán ser reelectos, acorde a lo establecido en el artículo 116, base IV, inciso c), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DÉCIMA PRIMERA. Transparencia

El resultado de cada una de las etapas deberá hacerse público a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y por los demás medios que determine la Comisión de Vinculación, en los términos establecidos para cada etapa en la presente Convocatoria.

La información y documentación que integre los expedientes individuales de las y los aspirantes será confidencial en términos de lo establecido en el artículo 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que no podrá tener otro fin que el previsto en el proceso objeto de la presente Convocatoria, ni ser utilizada o difundida salvo que medie el

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

consentimiento expreso del titular conforme al Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En atención al principio de máxima publicidad, el Instituto realizará la publicación de la información más relevante de cada aspirante, utilizando para este propósito la que se encuentra contenida en el resumen curricular, entregada por cada aspirante al momento de su registro.

DÉCIMA SEGUNDA. Casos no previstos

Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la Comisión de Vinculación, con base en lo dispuesto en el Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

Para mayores informes favor de comunicarse a los teléfonos:

Junta Local Ejecutiva (01-983) 285-31-80

Junta Distrital 01 (01-984) 859-35-61

Junta Distrital 02 (01-983) 118-01-69

Junta Distrital 03 (01-998) 891-91-19 Ext.
4

Junta Distrital 04 (01-998) 206-80-68

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero y 41, Base V, apartado C, último párrafo; 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo 1, inciso d); 4, párrafo 2; 6, párrafo 2; 29, párrafo 1; 30, párrafo 2; 31, párrafos 1 y 4; 32, párrafo 2, inciso b); 39, párrafo 2; 42, párrafos 5, 6, 8 y 10; 43; 44, párrafo 1, incisos a), g) y jj); 45, párrafo 1, inciso a); 46, párrafo 1, inciso k); 60 inciso e); 99, párrafo 1; 100 y 101, de la Ley General; 73, inciso i) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

CONVOCA:

A las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 100, párrafos 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante Ley General); y artículo 9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, y deseen participar en el proceso de selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, a solicitar su registro y presentar su documentación de aspirante conforme a las siguientes:

BASES:

PRIMERA. Aspectos generales

Las y los aspirantes interesados en participar en el proceso de selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, deberán llenar los formatos que para tal efecto se pondrán a disposición en el portal del Instituto www.ine.mx, desde el **23 de julio al 17 de agosto 2018**.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Una vez requisitados los formatos, deberán imprimirse, **verificar que la información capturada se encuentre completa al imprimir el formato** y firmarse. Los formatos tendrán como único propósito recabar la información de las y los aspirantes, por lo que en ningún caso se podrán considerar como una constancia de registro al proceso de selección y designación.

Tanto los formatos como la documentación solicitada en la presente Convocatoria se recibirán del **13 al 17 de agosto de 2018**, en las oficinas de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas o en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).

Quien así lo requiera podrá asistir a las oficinas antes mencionadas para ser auxiliados en el llenado de los formatos.

La recepción de solicitudes debidamente requisitadas se realizará ante los siguientes órganos del Instituto Nacional Electoral:

Secretaría Ejecutiva

Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio A, Planta Alta, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México, C.P. 14610.

Junta Local Ejecutiva

Avenida Nicolás Bravo #1090 Sur, Colonia Industrial Bravo, Culiacán, Sinaloa, C. P. 80120.

Junta Distrital 01

Avenida Benemérito de las Américas Número 1010-A, Número 7, Fraccionamiento San Ángel, Mazatlán, Sinaloa, C. P. 82014.

Junta Distrital 02

Calle Gabriel Leyva, esquina con callejón, José María Pino Suárez, Colonia Centro, Los Mochis, Sinaloa, C. P. 81200.

Junta Distrital 03

Carretera Mocorito No. 315 Ote., Colonia Évora, esquina con Avenida Salvador Alvarado, Guamúchil, Sinaloa, C. P. 81460.

Junta Distrital 04

Calle Cuauhtémoc No. 501, Colonia Centro, Guasave, Sinaloa, C. P. 81000.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Junta Distrital 05

Calle Río Papaloapan No. 1006, Colonia Popular, Culiacán, Sinaloa, C. P. 80120.

Junta Distrital 06

Calle Sinaloa No. 41, esquina con Avenida Revolución, Colonia Sánchez Célis, Mazatlán, Sinaloa, C. P. 82120.

Junta Distrital 07

Calzada Heroico Colegio Militar No. 3793 Sur, Colonia Mercado de Abastos, Culiacán, Sinaloa, C. P. 80299.

Las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 100, párrafo 2 de la Ley General y en el artículo 9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, podrán inscribirse como aspirantes al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.

De conformidad con el artículo 13, párrafo 4, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, las y los aspirantes que participen en el proceso de selección y designación en todo momento deberán mantener el cumplimiento de requisitos; de no ser así, la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante Comisión de Vinculación), descartará a la o el aspirante que se encuentre en este supuesto en cualquier etapa del proceso.

SEGUNDA. Cargo y periodo a designar.

El proceso de selección tiene como propósito designar a tres Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, que durarán en su encargo siete años, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 101, párrafo 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

TERCERA. Requisitos.

Las y los interesados en ocupar el cargo referido en la Base Segunda deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
2. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente;
3. Tener más de 30 años cumplidos al día de la designación;
4. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel licenciatura;
5. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
6. Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
7. No haber sido registrado como candidata o candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación;
8. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación;
9. No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;
10. No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación como de las entidades federativas, ni subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno. No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni Gobernadora o Gobernador, ni Secretaria o Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser Presidenta o Presidente Municipal, Síndico (a) o Regidor (a) o titular de dependencia de los Ayuntamientos; y
11. No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa o de cualquier otra entidad federativa.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

CUARTA. Documentación a entregar.

Las y los interesados deberán presentar la siguiente documentación:

1. Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto;
2. Copia certificada del acta de nacimiento;
3. En caso de no ser originario de la entidad federativa correspondiente, deberá presentar una constancia que acredite una residencia efectiva en la entidad de por lo menos cinco años anteriores a la fecha de designación establecida en la Convocatoria; dicha constancia deberá ser expedida por autoridad competente. En su caso, el documento con el que compruebe ubicarse en una excepción por razón de ausencia del país por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
4. Original y copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, para su certificación;
5. Dos fotografías recientes tamaño infantil a color;
6. Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la solicitud con una antigüedad máxima de tres meses;
7. Copia certificada del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha de expedición mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la Convocatoria para la designación;
8. Currículum vitae firmado por la o el aspirante a través del formato que para tal efecto estará disponible en el portal del Instituto, el cual deberá contener, entre otros datos: nombre y apellidos completos, domicilio, teléfonos y correo electrónico, estudios realizados, trayectoria laboral, académica, política, docente y profesional, publicaciones, actividad empresarial, cargos de elección popular, organizaciones de cualquier tipo a las que pertenezca y el carácter de su participación, así como el empleo, cargo o comisión que, en su caso, desempeñe al momento del registro;
9. Resumen curricular con una extensión máxima de una cuartilla con letra Arial 12, para su eventual publicación, por lo que no deberá contener datos personales privados. Para lo anterior, deberá emplear el formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto; y
10. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa (empleando el formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto), en la que se manifieste:
 - a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

- b) No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
- c) No haber sido registrado como candidata o candidato a cargo alguno de elección popular durante los cuatro años anteriores a la designación;
- d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación;
- e) No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;
- f) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno federal o de las entidades federativas, ni subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno;
- g) No ser jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni gobernadora o gobernador, ni secretaria o secretario de gobierno o su equivalente a nivel local;
- h) No ser jefe o jefa delegacional, presidenta o presidente municipal, síndica o síndico o regidora o regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos;
- i) No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa o de cualquier otra entidad federativa;
- j) La aceptación de dar por concluido todo empleo, cargo o comisión en caso de ser designado como Consejera o Consejero Presidente;
- k) Toda la información que, con motivo del proceso de selección a que se refiere la Convocatoria, ha proporcionado o llegue a proporcionar es veraz y toda la documentación que ha entregado o llegue a entregar es auténtica;
- l) La aceptación de sujetarse a la Convocatoria y a las reglas establecidas en el presente proceso de selección; y
- m) Consentimiento para que sus datos personales sean utilizados únicamente para los fines de la convocatoria.

Los formatos para la presentación de los requisitos establecidos en los párrafos 1, 8, 9 y 10, estarán disponibles en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en las oficinas del Instituto Nacional Electoral.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Si fuera el caso de que las y los interesados, con motivo de alguna convocatoria anterior hubieran presentado al Instituto Nacional Electoral copia certificada del acta de nacimiento; del título o cédula profesional de nivel licenciatura y los mismos obraran en los archivos del Instituto, deberán hacerlo del conocimiento en su solicitud de registro de la presente Convocatoria, los cuales se ubicarán en una situación de excepción para exhibirlos, una vez que la autoridad nacional electoral verifique su resguardo documental.

De ser el caso que la solicitud de la o el aspirante se realice el día 17 de agosto de 2018, la Unidad Técnica contará con el término de veinticuatro horas para verificar en sus archivos la existencia de dichos documentos, y en caso de que no cuente con ellos, requerirá a la o el aspirante para que dentro del término de cuarenta y ocho horas los remita digitalizados a través de correo electrónico y de igual forma en forma física, a través de la Junta Local o Distrital de su entidad federativa.

QUINTA. Plazos y horarios para el registro

Las y los aspirantes deberán presentar los formatos referidos en las Bases Primera y Cuarta para solicitar su registro del **13 al 17 de agosto de 2018**, en la Secretaría Ejecutiva, en la Junta Local Ejecutiva o en las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral correspondientes al estado de Sinaloa, en los domicilios citados en la Base Primera de la presente Convocatoria, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).

SEXTA. Notificaciones.

Todas las notificaciones se harán mediante el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, salvo aquéllas que deban realizarse de manera personal a las y los aspirantes, mismas que se harán mediante el correo electrónico que hayan registrado y que deberán ser acusadas de recibido por los aspirantes de forma inmediata a su recepción, en el entendido de que quienes no lo hagan dentro de las veinticuatro horas posteriores a su envío, se darán por debidamente notificados.

Las ciudadanas o ciudadanos designados por el Consejo General serán notificados en los términos del artículo 24, párrafo 7, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

SÉPTIMA. Etapas del proceso de selección y designación.

El proceso de selección de las Consejeras o Consejeros Electorales del órgano superior de dirección del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa se desarrollará de conformidad con las siguientes etapas:

1. Registro de aspirantes. Las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en el estado de Sinaloa, así como la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral recibirán, en las fechas establecidas en la Base Quinta de la presente Convocatoria, las solicitudes y la documentación que presenten las y los aspirantes o por persona autorizada por escrito, siempre y cuando en la solicitud aparezca la firma autógrafa de dichos aspirantes para ocupar el cargo convocado. Cada órgano receptor será el responsable de concentrar las solicitudes y documentación correspondiente para la integración de los expedientes.

En las sedes de las Juntas Local y Distritales del estado de Sinaloa, así como de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, se proporcionará el apoyo necesario para llevar a cabo el registro en el sistema habilitado para la presente Convocatoria.

Al momento de presentar la solicitud de registro y entregar la documentación correspondiente, las y los aspirantes recibirán un acuse con un folio asignado y la descripción de la información y documentación entregada al Instituto, el cual deberán firmar de conformidad. El mencionado comprobante tendrá como único propósito acusar de recibida la documentación ahí referida, por lo que en ningún caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos de esta Convocatoria.

La Junta Local Ejecutiva será la responsable de concentrar los expedientes de las y los aspirantes que se presenten ante la misma y ante las Juntas Distritales Ejecutivas, elaborando una lista de aquéllos que presentaron su solicitud, señalando las inconsistencias u omisiones en los documentos presentados, las cuales serán puestas a consideración de la Comisión de Vinculación.

A más tardar el **20 de agosto de 2018**, la Junta Local Ejecutiva remitirá los expedientes a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante Unidad de Vinculación) para que ésta los entregue tanto en físico como en versión

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

electrónica al Presidente de la Comisión de Vinculación. Al resto de las y los Consejeros del Consejo General se les entregará una copia en medio electrónico.

Los expedientes originales estarán bajo resguardo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación, quien los pondrá a disposición para consulta de las y los integrantes del Consejo General y de la propia Comisión.

La Secretaría Ejecutiva y las Juntas Local y Distritales no podrán descartar o rechazar solicitud alguna que se les presente. En caso de que algún aspirante no entregue la totalidad de la documentación, podrá subsanar la omisión siempre y cuando se encuentre dentro del periodo de registro establecido en la presente Convocatoria o a solicitud expresa de la Unidad de Vinculación.

2. Verificación de los requisitos legales. La Comisión de Vinculación, con el apoyo de los grupos de trabajo que en su caso se conformen, verificará el cumplimiento de los requisitos legales, y aprobará, a más tardar el **28 de agosto de 2018**, el Acuerdo que contenga la relación con los nombres y apellidos de las y los aspirantes que cumplen con todos los requisitos y ordenará su publicación, agregando el resumen curricular de cada uno de los aspirantes.

En el mismo Acuerdo, la Comisión de Vinculación aprobará la sede y horario en que se aplicará el examen de conocimientos.

La Unidad de Vinculación publicará la guía de estudio y las condiciones del examen de conocimientos, en la misma fecha en la que se habiliten los formatos de registro de aspirantes en la página del Instituto; es decir, el **23 de julio**.

La información prevista en los párrafos anteriores deberá ser publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas en el estado de Sinaloa.

3. Examen de conocimientos. Las y los aspirantes que hayan cumplido con todos los requisitos legales serán convocados a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, para presentar el examen de conocimientos, mismo que tendrá verificativo el día **1 de septiembre de 2018**, en la sede previamente definida y publicada en el portal del Instituto por la Unidad de Vinculación. La fecha para la presentación del examen será inamovible, por lo que no podrá aplicarse en otra diversa, por ninguna causa.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

El examen comprenderá dos apartados: el primero, de competencias básicas, que comprende las áreas comunicativa y matemática, el cual tendrá una ponderación en la calificación de 40%. El segundo será de conocimientos técnicos, y comprenderá las áreas teórico-normativa y de procedimientos electorales, el cual tendrá una ponderación en la calificación de 60%.

La estructura y el contenido del examen de conocimientos serán debidamente establecidos en la guía de estudios que se publicará en la página del Instituto.

Las y los aspirantes deberán identificarse con credencial para votar o identificación oficial con fotografía vigente. La aplicación y evaluación del examen de conocimientos estará a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).

La Comisión de Vinculación solicitará al Ceneval que la entrega de los resultados se realice con listas diferenciadas de mujeres y hombres, en orden de mayor a menor calificación. De tal manera que pasarán a la siguiente etapa 12 aspirantes mujeres y 12 aspirantes hombres que obtengan la mejor calificación, siempre y cuando ésta sea igual o mayor a seis. En caso de empate en la posición número 12, accederán las y los aspirantes que se encuentren en este supuesto.

Los resultados del examen de conocimientos se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día **13 de septiembre de 2018**, ordenados de mayor a menor calificación y diferenciando las listas de la forma siguiente:

- a) Nombre de las aspirantes que acceden a la siguiente etapa;
- b) Nombre de los aspirantes que acceden a la siguiente etapa; y
- c) Folios de las y los aspirantes que no pasan a la siguiente etapa.

A partir de dicha publicación, las y los aspirantes que no hubiesen accedido a la siguiente etapa, tendrán hasta el día **17 de septiembre de 2018** para en su caso, solicitar por escrito al correo electrónico revisiones.utvopl@ine.mx o ante la Unidad de Vinculación, la revisión del examen, misma que tendrá verificativo a partir del día **18 de septiembre de 2018**. La Unidad de Vinculación notificará a las y los solicitantes a través del correo electrónico que hayan proporcionado, la fecha, hora y lugar para la realización de la sesión de revisión. En todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la Ciudad de México.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Para la revisión del examen, se llevará a cabo una sesión por cada solicitante y a la misma acudirán personalmente la o el aspirante, un representante de Ceneval, y un representante de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación o la o el funcionario que ésta designe, quien levantará un acta de revisión de examen que deberá ser firmada por quienes intervengan en dicho acto. Para el desahogo de dicha sesión, la Institución evaluadora del examen proporcionará a la Secretaría Técnica todos los elementos necesarios para salvaguardar el derecho de audiencia y debido proceso del solicitante.

Si los resultados de la revisión realizada determinan que la o el sustentante obtuvo una calificación igual o superior a la posición 12, la Comisión de Vinculación ordenará su inclusión en la siguiente etapa, sin perjuicio de las y los aspirantes ya incluidos en las listas publicadas.

Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

4. Ensayo presencial. Las y los aspirantes que acrediten la etapa del examen de conocimientos, presentarán un ensayo de manera presencial, el **22 de septiembre de 2018**.

El Consejo General aprobará los lineamientos que establezcan lo siguiente:

- a) La institución de educación superior, de investigación o evaluación responsable de la aplicación y calificación de los ensayos presenciales;
- b) Criterios para la elaboración y dictamen de los ensayos presenciales;
- c) Requisitos formales para la aplicación del ensayo; y
- d) Fecha de entrega de resultados por parte de la institución educativa designada.

Los lineamientos aprobados serán notificados a las y los aspirantes, así como las sedes y horarios de aplicación, a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. La fecha para la elaboración del ensayo será inamovible, por lo que no podrá presentarse en otra fecha, bajo ningún motivo.

A través de la elaboración y presentación del ensayo, las y los aspirantes serán evaluados sobre la habilidad que posean para definir, situar y delimitar un problema del ámbito electoral, a partir de la delimitación y contextualización de un problema

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

central, de la identificación de los actores relevantes y los escenarios posibles, analizar los riesgos y oportunidades, para desarrollar propuesta operativas a efecto de gestionar o resolver los problemas identificados; no así sobre su postura u opinión particular con respecto al tema desarrollado. De esta manera, el ensayo permitirá calificar la capacidad de análisis, el desarrollo argumentativo, el planteamiento del problema y el desarrollo de escenarios y posibles soluciones, con el objeto de establecer una estrategia y una ruta crítica de acción con base en las atribuciones y competencias legales de los Organismos Públicos Locales.

La aplicación de los ensayos y su dictamen estará a cargo de la institución designada, que determinará quiénes son las y los aspirantes cuyo ensayo sea dictaminado como idóneo. Los ensayos serán evaluados por tres académicos que determine la propia institución y será idóneo el ensayo de la o el aspirante que obtenga al menos dos dictámenes favorables.

La institución designada entregará los tres dictámenes de cada uno de las y los aspirantes a la Comisión de Vinculación, a través de la Unidad de Vinculación a más tardar el día **11 de octubre de 2018**.

Los resultados del ensayo se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día **11 de octubre de 2018**, en listas diferenciadas, de acuerdo con lo siguiente:

- a) Nombre de las aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
- b) Nombre de los aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
- c) Folios de las y los aspirantes con dictamen de ensayo no idóneo.

Una vez que se tenga la lista de las y los aspirantes que hayan resultado con dictamen idóneo en el ensayo, la Comisión de Vinculación la hará de conocimiento público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y la notificará a las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, quienes podrán presentar por escrito, dentro de los cinco días hábiles siguientes, ante la misma Comisión, las observaciones y comentarios que consideren convenientes respecto de cada una de las y los aspirantes; el escrito deberá acompañarse de los elementos objetivos que sustenten o corroboren sus afirmaciones.

A partir de dicha publicación, aquellos aspirantes cuyo ensayo haya sido dictaminado como no idóneo, tendrán derecho a solicitar por escrito, hasta el día **15**

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

de octubre de 2018, su revisión ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Sinaloa o directamente ante la Unidad de Vinculación. La diligencia de revisión de ensayo deberá efectuarse a partir del día **16 de octubre de 2018**. En todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la Ciudad de México.

Si los resultados de la revisión realizada arrojan que el ensayo de la o el aspirante obtuvo un dictamen idóneo, la Comisión de Vinculación lo hará del conocimiento de las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para que en un término de dos días hábiles emitan las observaciones a que haya lugar en los términos precitados.

Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

Concluido el plazo de observaciones de las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, la Comisión de Vinculación hará del conocimiento público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, la relación de quienes, al no tener algún impedimento legal y habiendo aprobado las etapas anteriores, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista, conforme al calendario que apruebe la Comisión de Vinculación para tal efecto.

5. Valoración curricular y entrevista. Para los efectos de esta Convocatoria, la valoración curricular y la entrevista serán consideradas una misma etapa.

Las y los aspirantes cuyo ensayo resulte idóneo y se considere que no existen elementos objetivos aportados por las y los representantes de los partidos políticos o por Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para descalificarlos como aspirantes, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista.

El Consejo General, a propuesta de la Comisión de Vinculación, aprobará los criterios para realizar la valoración curricular y la entrevista, los que deberán considerar al menos lo siguiente:

- a) Propósito;
- b) Responsables de conducir las entrevistas;
- c) Procedimiento para la calificación;
- d) Las competencias a valorar;

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

- e) Ponderación que se utilizará para la calificación;
- f) Instrumento que se utilizará para la calificación.

Los criterios que apruebe el Consejo General serán notificados a las y los aspirantes a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx

Esta etapa estará a cargo de las y los Consejeros Electorales del Instituto, los cuales conformarán grupos de entrevistadores.

Al efecto, se procurará un equilibrio entre géneros en la conformación de las listas de las y los aspirantes que accedan a dicha etapa, para lo cual, la Comisión de Vinculación integrará las listas diferenciadas de hombres y mujeres cuyo ensayo presencial haya sido dictaminado como idóneo.

Las entrevistas se realizarán conforme al calendario y sedes que previamente apruebe la Comisión de Vinculación. La información sobre el calendario y la sede se publicará en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. Asimismo, se notificará a las y los aspirantes al correo electrónico proporcionado por los mismos, debiendo acusar de recibida dicha actuación. De la misma forma, se publicará en los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en el estado de Sinaloa.

Las entrevistas serán transmitidas en tiempo real en el portal del Instituto www.ine.mx, serán grabadas en video y estarán disponibles en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral.

En la etapa de valoración curricular y entrevista se identificará que el perfil de las y los aspirantes se apegue a los principios rectores de la función electoral y cuente con las competencias indispensables para determinar la idoneidad de las y los aspirantes para el desempeño del cargo.

La entrevista será presencial, se realizará en panel con al menos tres Consejeros o Consejeras Electorales, y deberá atender al proceso siguiente:

- a) **Antes de la entrevista.** Las y los aspirantes deberán presentarse por lo menos 30 minutos previos a la hora de inicio de la entrevista.
- b) **Durante la entrevista.** Se conforma de tres etapas: apertura, desarrollo y cierre; tendrá una duración de hasta 20 minutos.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

c) **Después de la entrevista.** Al finalizar el proceso de entrevista, cada Consejera o Consejero Electoral deberá asentar el valor cuantificable de cada uno de los rubros que conforman la cédula de valoración curricular y entrevista.

Excepcionalmente, previa causa justificada, las entrevistas podrán llevarse a cabo de manera virtual mediante el uso de tecnologías de la información.

Las y los Consejeros Electorales del Consejo General podrán utilizar cualquier documento, insumo o herramienta que coadyuve a la realización de la entrevista.

En atención al principio de máxima publicidad, las cédulas de los aspirantes se harán públicas en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

OCTAVA. Integración de las listas de candidatas y candidatos

Conforme a lo previsto en los artículos 100, párrafos 1 y 3 y 101, párrafos 1, inciso f), 3 y 4 de la Ley General y 24, párrafo 1, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, la Comisión de Vinculación presentará al Consejo General una lista con la totalidad de los nombres de las y los candidatos a ocupar el cargo.

La propuesta de la o el candidato deberá contener un dictamen debidamente fundado y motivado, que incluya todas las etapas del proceso de selección, además de los elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad y capacidad para el cargo de la o el aspirante.

Una vez elaborada la propuesta de la o el candidato, respaldada con el dictamen respectivo, la Comisión de Vinculación deberá someterla a la consideración del Consejo General con una anticipación no menor a setenta y dos horas previas a la sesión que corresponda.

NOVENA. Designaciones

El Consejo General designará a más tardar el día **1 de noviembre de 2018**, por mayoría de ocho votos, a las Consejeras o Consejeros Electorales que iniciarán el encargo de siete años en el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, especificando, en su caso, el periodo o la conclusión del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, párrafo 1, incisos a), g) y jj), de la Ley General, y del Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

La fecha mencionada en el párrafo anterior será tomada como base para determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Base Tercera, párrafos 3 y 4 de la presente Convocatoria.

Con base en los artículos 24, párrafo 9, y 27 párrafo 4 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, en la designación de las o los Consejeros Electorales correspondientes, se procurará observar el principio de paridad de género considerando la integración del órgano superior de dirección del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.

El Consejo General deberá ordenar la publicación del acuerdo de designación en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del estado de Sinaloa, así como comunicar a las autoridades locales la designación. Asimismo, ordenará a la Secretaría Ejecutiva notificar el acuerdo respectivo a la o el ciudadano designado.

La ciudadana o el ciudadano que haya sido designado como Consejera o Consejero Electoral, deberá acreditar o manifestar bajo protesta de decir verdad, dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación del Acuerdo de designación, que no desempeña ningún empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos relacionados con actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia no remunerados.

La lista que contenga el nombre de las Consejeras o Consejeros Electorales designados será publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

DÉCIMA. Nombramiento y toma de protesta

Las o los ciudadanos que hayan sido designados recibirán el nombramiento que lo acredita como Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa; mismo que contendrá, entre otras cosas el nombre y apellidos, cargo, periodo y fecha de expedición.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados rendirán protesta en la fecha que determine el acuerdo de designación que apruebe el Consejo General. Se rendirá protesta en la sede del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y deberá incluirse el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución Política del estado y las leyes que de ellas emanen, así como el apego a los principios rectores de la función electoral.

Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados no podrán ser reelectos, acorde a lo establecido en el artículo 116, base IV, inciso c), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DÉCIMA PRIMERA. Transparencia

El resultado de cada una de las etapas deberá hacerse público a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y por los demás medios que determine la Comisión de Vinculación, en los términos establecidos para cada etapa en la presente Convocatoria.

La información y documentación que integre los expedientes individuales de las y los aspirantes será confidencial en términos de lo establecido en el artículo 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que no podrá tener otro fin que el previsto en el proceso objeto de la presente Convocatoria, ni ser utilizada o difundida salvo que medie el consentimiento expreso del titular conforme al Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En atención al principio de máxima publicidad, el Instituto realizará la publicación de la información más relevante de cada aspirante, utilizando para este propósito la que se encuentra contenida en el resumen curricular, entregada por cada aspirante al momento de su registro.

DÉCIMA SEGUNDA. Casos no previstos

Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la Comisión de Vinculación, con base en lo dispuesto en el Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Para mayores informes favor de comunicarse a los teléfonos:

Junta Local Ejecutiva (01-667) 716-11-80 / (01-667) 716-14-35

Junta Distrital 01 (01-669) 916-53-67 /
(01-669) 916-53-67

Junta Distrital 03 (01-673) 732-32-13 /
(01-673) 732-32-13

Junta Distrital 05 (01-667) 717-27-57 /
(01-667) 992-05-16

Junta Distrital 07 (01-667) 749-71-93 /
(01-667) 749-71-93

Junta Distrital 02 (01-668) 818-80-83 /
(01-668) 818-16-07

Junta Distrital 04 (01-687) 871-22-09 /
(01-687) 872-38-37

Junta Distrital 06 (01-669) 986-53-35 /
(01-669) 990-16-87

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero y 41, Base V, apartado C, último párrafo; 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo 1, inciso d); 4, párrafo 2; 6, párrafo 2; 29, párrafo 1; 30, párrafo 2; 31, párrafos 1 y 4; 32, párrafo 2, inciso b); 39, párrafo 2; 42, párrafos 5, 6, 8 y 10; 43; 44, párrafo 1, incisos a), g) y jj); 45, párrafo 1, inciso a); 46, párrafo 1, inciso k); 60 inciso e); 99, párrafo 1; 100 y 101, de la Ley General; 73, inciso i) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

CONVOCA:

A las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 100, párrafos 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante Ley General); y artículo 9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, y deseen participar en el proceso de selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas, a solicitar su registro y presentar su documentación de aspirante conforme a las siguientes:

BASES:

PRIMERA. Aspectos generales

Las y los aspirantes interesados en participar en el proceso de selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas, deberán llenar los formatos que para tal efecto se pondrán a disposición en el portal del Instituto www.ine.mx, desde el **23 de julio al 17 de agosto 2018**.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Una vez requisitados los formatos, deberán imprimirse, **verificar que la información capturada se encuentre completa al imprimir el formato** y firmarse. Los formatos tendrán como único propósito recabar la información de las y los aspirantes, por lo que en ningún caso se podrán considerar como una constancia de registro al proceso de selección y designación.

Tanto los formatos como la documentación solicitada en la presente Convocatoria se recibirán del **13 al 17 de agosto de 2018**, en las oficinas de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas o en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).

Quien así lo requiera podrá asistir a las oficinas antes mencionadas para ser auxiliados en el llenado de los formatos.

La recepción de solicitudes debidamente requisitadas se realizará ante los siguientes órganos del Instituto Nacional Electoral:

Secretaría Ejecutiva

Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio A, Planta Alta, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México, C.P. 14610.

Junta Local Ejecutiva

17 Rosales No. 701 Sur, Zona Centro, Ciudad Victoria, Tamaulipas, C. P. 87000.

Junta Distrital 01

Dr. Mier No. 4336, Colonia Hidalgo, Nuevo Laredo, Tamaulipas, C. P. 88160.

Junta Distrital 02

Matamoros No. 320 Oriente, entre Guadalupe y Victoria, Zona Centro, Reynosa, Tamaulipas, C. P. 88500.

Junta Distrital 03

Chihuahua No. 407, entre Nayarit y Oaxaca, Fraccionamiento Río Bravo, Río Bravo, Tamaulipas, C. P. 88900.

Junta Distrital 04

Calle 2da. No. 146, entre Abasolo y González, Zona Centro, Matamoros, Tamaulipas, C. P. 87300.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Junta Distrital 05

Mier y Terán No.1528, entre Veracruz y Alejandro Prieto, Colonia Pedro José Méndez, Ciudad Victoria, Tamaulipas, C. P 87048.

Junta Distrital 06

Blvd. Manuel Cavazos Lerma No. 403 Norte, Colonia Anáhuac 1, Ciudad Mante, Tamaulipas, C. P. 89830.

Junta Distrital 07

13 de Enero No. 311 Sur esq. Pedro J. Méndez, Zona Centro, Ciudad Madero, Tamaulipas, C. P. 89400.

Junta Distrital 08

México No. 310, entre Guadalupe y Tampico, Colonia Guadalupe, Tampico, Tamaulipas, C. P. 89120.

Junta Distrital 09

Calle Escocia (Camino Real) No. 204 L-1 M-2, Fraccionamiento Campestre, Reynosa, Tamaulipas, C. P. 88736.

Las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 100, párrafo 2 de la Ley General y en el artículo 9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, podrán inscribirse como aspirantes al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas.

De conformidad con el artículo 13, párrafo 4, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, las y los aspirantes que participen en el proceso de selección y designación en todo momento deberán mantener el cumplimiento de requisitos; de no ser así, la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante Comisión de Vinculación), descartará a la o el aspirante que se encuentre en este supuesto en cualquier etapa del proceso.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

SEGUNDA. Cargo y periodo a designar.

El proceso de selección tiene como propósito designar a tres Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto Electoral de Tamaulipas, que durarán en su encargo siete años, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 101, párrafo 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

TERCERA. Requisitos.

Las y los interesados en ocupar el cargo referido en la Base Segunda deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
2. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente;
3. Tener más de 30 años cumplidos al día de la designación;
4. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel licenciatura;
5. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
6. Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
7. No haber sido registrado como candidata o candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación;
8. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación;
9. No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;
10. No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación como de las entidades federativas, ni subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno. No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni Gobernadora o Gobernador, ni Secretaria o Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser Presidenta o Presidente Municipal, Síndico (a) o Regidor (a) o titular de dependencia de los Ayuntamientos; y

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

11. No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas o de cualquier otra entidad federativa.

CUARTA. Documentación a entregar.

Las y los interesados deberán presentar la siguiente documentación:

1. Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto;
2. Copia certificada del acta de nacimiento;
3. En caso de no ser originario de la entidad federativa correspondiente, deberá presentar una constancia que acredite una residencia efectiva en la entidad de por lo menos cinco años anteriores a la fecha de designación establecida en la Convocatoria; dicha constancia deberá ser expedida por autoridad competente. En su caso, el documento con el que compruebe ubicarse en una excepción por razón de ausencia del país por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
4. Original y copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, para su certificación;
5. Dos fotografías recientes tamaño infantil a color;
6. Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la solicitud con una antigüedad máxima de tres meses;
7. Copia certificada del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha de expedición mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la Convocatoria para la designación;
8. Currículum vitae firmado por la o el aspirante a través del formato que para tal efecto estará disponible en el portal del Instituto, el cual deberá contener, entre otros datos: nombre y apellidos completos, domicilio, teléfonos y correo electrónico, estudios realizados, trayectoria laboral, académica, política, docente y profesional, publicaciones, actividad empresarial, cargos de elección popular, organizaciones de cualquier tipo a las que pertenezca y el carácter de su participación, así como el empleo, cargo o comisión que, en su caso, desempeñe al momento del registro;
9. Resumen curricular con una extensión máxima de una cuartilla con letra Arial 12, para su eventual publicación, por lo que no deberá contener datos personales privados. Para lo anterior, deberá emplear el formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto; y

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

10. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa (empleando el formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto), en la que se manifieste:
- a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
 - b) No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
 - c) No haber sido registrado como candidata o candidato a cargo alguno de elección popular durante los cuatro años anteriores a la designación;
 - d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación;
 - e) No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;
 - f) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno federal o de las entidades federativas, ni subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno;
 - g) No ser jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni gobernadora o gobernador, ni secretaria o secretario de gobierno o su equivalente a nivel local;
 - h) No ser jefe o jefa delegacional, presidenta o presidente municipal, síndica o síndico o regidora o regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos;
 - i) No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas o de cualquier otra entidad federativa;
 - j) La aceptación de dar por concluido todo empleo, cargo o comisión en caso de ser designado como Consejera o Consejero Presidente;
 - k) Toda la información que, con motivo del proceso de selección a que se refiere la Convocatoria, ha proporcionado o llegue a proporcionar es veraz y toda la documentación que ha entregado o llegue a entregar es auténtica;
 - l) La aceptación de sujetarse a la Convocatoria y a las reglas establecidas en el presente proceso de selección; y

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

- m) Consentimiento para que sus datos personales sean utilizados únicamente para los fines de la convocatoria.

Los formatos para la presentación de los requisitos establecidos en los párrafos 1, 8, 9 y 10, estarán disponibles en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en las oficinas del Instituto Nacional Electoral.

Si fuera el caso de que las y los interesados, con motivo de alguna convocatoria anterior hubieran presentado al Instituto Nacional Electoral copia certificada del acta de nacimiento; del título o cédula profesional de nivel licenciatura y los mismos obraran en los archivos del Instituto, deberán hacerlo del conocimiento en su solicitud de registro de la presente Convocatoria, los cuales se ubicarán en una situación de excepción para exhibirlos, una vez que la autoridad nacional electoral verifique su resguardo documental.

De ser el caso que la solicitud de la o el aspirante se realice el día 17 de agosto de 2018, la Unidad Técnica contará con el término de veinticuatro horas para verificar en sus archivos la existencia de dichos documentos, y en caso de que no cuente con ellos, requerirá a la o el aspirante para que dentro del término de cuarenta y ocho horas los remita digitalizados a través de correo electrónico y de igual forma en forma física, a través de la Junta Local o Distrital de su entidad federativa.

QUINTA. Plazos y horarios para el registro

Las y los aspirantes deberán presentar los formatos referidos en las Bases Primera y Cuarta para solicitar su registro del **13 al 17 de agosto de 2018**, en la Secretaría Ejecutiva, en la Junta Local Ejecutiva o en las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral correspondientes al estado de Tamaulipas, en los domicilios citados en la Base Primera de la presente Convocatoria, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).

SEXTA. Notificaciones.

Todas las notificaciones se harán mediante el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, salvo aquéllas que deban realizarse de manera personal a las y los aspirantes, mismas que se harán mediante el correo electrónico que hayan registrado y que deberán ser acusadas de recibido por los aspirantes de forma inmediata a su recepción, en el entendido de que quienes no lo hagan dentro de las veinticuatro horas posteriores a su envío, se darán por debidamente notificados.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Las ciudadanas o ciudadanos designados por el Consejo General serán notificados en los términos del artículo 24, párrafo 7, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

SÉPTIMA. Etapas del proceso de selección y designación.

El proceso de selección de las Consejeras o Consejeros Electorales del órgano superior de dirección del Instituto Electoral de Tamaulipas se desarrollará de conformidad con las siguientes etapas:

1. Registro de aspirantes. Las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tamaulipas, así como la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral recibirán, en las fechas establecidas en la Base Quinta de la presente Convocatoria, las solicitudes y la documentación que presenten las y los aspirantes o por persona autorizada por escrito, siempre y cuando en la solicitud aparezca la firma autógrafa de dichos aspirantes para ocupar el cargo convocado. Cada órgano receptor será el responsable de concentrar las solicitudes y documentación correspondiente para la integración de los expedientes.

En las sedes de las Juntas Local y Distritales del estado de Tamaulipas, así como de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, se proporcionará el apoyo necesario para llevar a cabo el registro en el sistema habilitado para la presente Convocatoria.

Al momento de presentar la solicitud de registro y entregar la documentación correspondiente, las y los aspirantes recibirán un acuse con un folio asignado y la descripción de la información y documentación entregada al Instituto, el cual deberán firmar de conformidad. El mencionado comprobante tendrá como único propósito acusar de recibida la documentación ahí referida, por lo que en ningún caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos de esta Convocatoria.

La Junta Local Ejecutiva será la responsable de concentrar los expedientes de las y los aspirantes que se presenten ante la misma y ante las Juntas Distritales Ejecutivas, elaborando una lista de aquéllos que presentaron su solicitud, señalando las inconsistencias u omisiones en los documentos presentados, las cuales serán puestas a consideración de la Comisión de Vinculación.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

A más tardar el **20 de agosto de 2018**, la Junta Local Ejecutiva remitirá los expedientes a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante Unidad de Vinculación) para que ésta los entregue tanto en físico como en versión electrónica al Presidente de la Comisión de Vinculación. Al resto de las y los Consejeros del Consejo General se les entregará una copia en medio electrónico.

Los expedientes originales estarán bajo resguardo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación, quien los pondrá a disposición para consulta de las y los integrantes del Consejo General y de la propia Comisión.

La Secretaría Ejecutiva y las Juntas Local y Distritales no podrán descartar o rechazar solicitud alguna que se les presente. En caso de que algún aspirante no entregue la totalidad de la documentación, podrá subsanar la omisión siempre y cuando se encuentre dentro del periodo de registro establecido en la presente Convocatoria o a solicitud expresa de la Unidad de Vinculación.

2. Verificación de los requisitos legales. La Comisión de Vinculación, con el apoyo de los grupos de trabajo que en su caso se conformen, verificará el cumplimiento de los requisitos legales, y aprobará, a más tardar el **28 de agosto de 2018**, el Acuerdo que contenga la relación con los nombres y apellidos de las y los aspirantes que cumplen con todos los requisitos y ordenará su publicación, agregando el resumen curricular de cada uno de los aspirantes.

En el mismo Acuerdo, la Comisión de Vinculación aprobará la sede y horario en que se aplicará el examen de conocimientos.

La Unidad de Vinculación publicará la guía de estudio y las condiciones del examen de conocimientos, en la misma fecha en la que se habiliten los formatos de registro de aspirantes en la página del Instituto; es decir, el **23 de julio**.

La información prevista en los párrafos anteriores deberá ser publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas en el estado de Tamaulipas.

3. Examen de conocimientos. Las y los aspirantes que hayan cumplido con todos los requisitos legales serán convocados a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, para presentar el examen de conocimientos, mismo que tendrá verificativo el día **1 de septiembre de 2018**, en la sede previamente definida y publicada en el portal del Instituto por la Unidad de Vinculación. La fecha para la

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

presentación del examen será inamovible, por lo que no podrá aplicarse en otra diversa, por ninguna causa.

El examen comprenderá dos apartados: el primero, de competencias básicas, que comprende las áreas comunicativa y matemática, el cual tendrá una ponderación en la calificación de 40%. El segundo será de conocimientos técnicos, y comprenderá las áreas teórico-normativa y de procedimientos electorales, el cual tendrá una ponderación en la calificación de 60%.

La estructura y el contenido del examen de conocimientos serán debidamente establecidos en la guía de estudios que se publicará en la página del Instituto.

Las y los aspirantes deberán identificarse con credencial para votar o identificación oficial con fotografía vigente. La aplicación y evaluación del examen de conocimientos estará a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).

La Comisión de Vinculación solicitará al Ceneval que la entrega de los resultados se realice con listas diferenciadas de mujeres y hombres, en orden de mayor a menor calificación. De tal manera que pasarán a la siguiente etapa 12 aspirantes mujeres y 12 aspirantes hombres que obtengan la mejor calificación, siempre y cuando ésta sea igual o mayor a seis. En caso de empate en la posición número 12, accederán las y los aspirantes que se encuentren en este supuesto.

Los resultados del examen de conocimientos se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día **13 de septiembre de 2018**, ordenados de mayor a menor calificación y diferenciando las listas de la forma siguiente:

- a) Nombre de las aspirantes que acceden a la siguiente etapa;
- b) Nombre de los aspirantes que acceden a la siguiente etapa; y
- c) Folios de las y los aspirantes que no pasan a la siguiente etapa.

A partir de dicha publicación, las y los aspirantes que no hubiesen accedido a la siguiente etapa, tendrán hasta el día **17 de septiembre de 2018** para en su caso, solicitar por escrito al correo electrónico revisiones.utvopl@ine.mx o ante la Unidad de Vinculación, la revisión del examen, misma que tendrá verificativo a partir del día **18 de septiembre de 2018**. La Unidad de Vinculación notificará a las y los solicitantes a través del correo electrónico que hayan proporcionado, la fecha, hora y lugar para la realización de la sesión de revisión. En todos los casos las sesiones

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la Ciudad de México.

Para la revisión del examen, se llevará a cabo una sesión por cada solicitante y a la misma acudirán personalmente la o el aspirante, un representante de Ceneval, y un representante de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación o la o el funcionario que ésta designe, quien levantará un acta de revisión de examen que deberá ser firmada por quienes intervengan en dicho acto. Para el desahogo de dicha sesión, la Institución evaluadora del examen proporcionará a la Secretaría Técnica todos los elementos necesarios para salvaguardar el derecho de audiencia y debido proceso del solicitante.

Si los resultados de la revisión realizada determinan que la o el sustentante obtuvo una calificación igual o superior a la posición 12, la Comisión de Vinculación ordenará su inclusión en la siguiente etapa, sin perjuicio de las y los aspirantes ya incluidos en las listas publicadas.

Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

4. Ensayo presencial. Las y los aspirantes que acrediten la etapa del examen de conocimientos, presentarán un ensayo de manera presencial, el **22 de septiembre de 2018**.

El Consejo General aprobará los lineamientos que establezcan lo siguiente:

- a) La institución de educación superior, de investigación o evaluación responsable de la aplicación y calificación de los ensayos presenciales;
- b) Criterios para la elaboración y dictamen de los ensayos presenciales;
- c) Requisitos formales para la aplicación del ensayo; y
- d) Fecha de entrega de resultados por parte de la institución educativa designada.

Los lineamientos aprobados serán notificados a las y los aspirantes, así como las sedes y horarios de aplicación, a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. La fecha para la elaboración del ensayo será inamovible, por lo que no podrá presentarse en otra fecha, bajo ningún motivo.

A través de la elaboración y presentación del ensayo, las y los aspirantes serán evaluados sobre la habilidad que posean para definir, situar y delimitar un problema

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

del ámbito electoral, a partir de la delimitación y contextualización de un problema central, de la identificación de los actores relevantes y los escenarios posibles, analizar los riesgos y oportunidades, para desarrollar propuesta operativas a efecto de gestionar o resolver los problemas identificados; no así sobre su postura u opinión particular con respecto al tema desarrollado. De esta manera, el ensayo permitirá calificar la capacidad de análisis, el desarrollo argumentativo, el planteamiento del problema y el desarrollo de escenarios y posibles soluciones, con el objeto de establecer una estrategia y una ruta crítica de acción con base en las atribuciones y competencias legales de los Organismos Públicos Locales.

La aplicación de los ensayos y su dictamen estará a cargo de la institución designada, que determinará quiénes son las y los aspirantes cuyo ensayo sea dictaminado como idóneo. Los ensayos serán evaluados por tres académicos que determine la propia institución y será idóneo el ensayo de la o el aspirante que obtenga al menos dos dictámenes favorables.

La institución designada entregará los tres dictámenes de cada uno de las y los aspirantes a la Comisión de Vinculación, a través de la Unidad de Vinculación a más tardar el día **11 de octubre de 2018**.

Los resultados del ensayo se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día **11 de octubre de 2018**, en listas diferenciadas, de acuerdo con lo siguiente:

- a) Nombre de las aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
- b) Nombre de los aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
- c) Folios de las y los aspirantes con dictamen de ensayo no idóneo.

Una vez que se tenga la lista de las y los aspirantes que hayan resultado con dictamen idóneo en el ensayo, la Comisión de Vinculación la hará de conocimiento público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y la notificará a las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, quienes podrán presentar por escrito, dentro de los cinco días hábiles siguientes, ante la misma Comisión, las observaciones y comentarios que consideren convenientes respecto de cada una de las y los aspirantes; el escrito deberá acompañarse de los elementos objetivos que sustenten o corroboren sus afirmaciones.

A partir de dicha publicación, aquellos aspirantes cuyo ensayo haya sido dictaminado como no idóneo, tendrán derecho a solicitar por escrito, hasta el día **15**

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

de octubre de 2018, su revisión ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tamaulipas o directamente ante la Unidad de Vinculación. La diligencia de revisión de ensayo deberá efectuarse a partir del día **16 de octubre de 2018**. En todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la Ciudad de México.

Si los resultados de la revisión realizada arrojan que el ensayo de la o el aspirante obtuvo un dictamen idóneo, la Comisión de Vinculación lo hará del conocimiento de las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para que en un término de dos días hábiles emitan las observaciones a que haya lugar en los términos precitados.

Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

Concluido el plazo de observaciones de las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, la Comisión de Vinculación hará del conocimiento público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, la relación de quienes, al no tener algún impedimento legal y habiendo aprobado las etapas anteriores, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista, conforme al calendario que apruebe la Comisión de Vinculación para tal efecto.

5. Valoración curricular y entrevista. Para los efectos de esta Convocatoria, la valoración curricular y la entrevista serán consideradas una misma etapa.

Las y los aspirantes cuyo ensayo resulte idóneo y se considere que no existen elementos objetivos aportados por las y los representantes de los partidos políticos o por Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para descalificarlos como aspirantes, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista.

El Consejo General, a propuesta de la Comisión de Vinculación, aprobará los criterios para realizar la valoración curricular y la entrevista, los que deberán considerar al menos lo siguiente:

- a) Propósito;
- b) Responsables de conducir las entrevistas;
- c) Procedimiento para la calificación;
- d) Las competencias a valorar;
- e) Ponderación que se utilizará para la calificación;

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

f) Instrumento que se utilizará para la calificación.

Los criterios que apruebe el Consejo General serán notificados a las y los aspirantes a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx

Esta etapa estará a cargo de las y los Consejeros Electorales del Instituto, los cuales conformarán grupos de entrevistadores.

Al efecto, se procurará un equilibrio entre géneros en la conformación de las listas de las y los aspirantes que accedan a dicha etapa, para lo cual, la Comisión de Vinculación integrará las listas diferenciadas de hombres y mujeres cuyo ensayo presencial haya sido dictaminado como idóneo.

Las entrevistas se realizarán conforme al calendario y sedes que previamente apruebe la Comisión de Vinculación. La información sobre el calendario y la sede se publicará en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. Asimismo, se notificará a las y los aspirantes al correo electrónico proporcionado por los mismos, debiendo acusar de recibida dicha actuación. De la misma forma, se publicará en los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tamaulipas.

Las entrevistas serán transmitidas en tiempo real en el portal del Instituto www.ine.mx, serán grabadas en video y estarán disponibles en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral.

En la etapa de valoración curricular y entrevista se identificará que el perfil de las y los aspirantes se apegue a los principios rectores de la función electoral y cuente con las competencias indispensables para determinar la idoneidad de las y los aspirantes para el desempeño del cargo.

La entrevista será presencial, se realizará en panel con al menos tres Consejeros o Consejeras Electorales, y deberá atender al proceso siguiente:

- a) **Antes de la entrevista.** Las y los aspirantes deberán presentarse por lo menos 30 minutos previos a la hora de inicio de la entrevista.
- b) **Durante la entrevista.** Se conforma de tres etapas: apertura, desarrollo y cierre; tendrá una duración de hasta 20 minutos.
- c) **Después de la entrevista.** Al finalizar el proceso de entrevista, cada Consejera o Consejero Electoral deberá asentar el valor cuantificable de cada uno de los rubros que conforman la cédula de valoración curricular y entrevista.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Excepcionalmente, previa causa justificada, las entrevistas podrán llevarse a cabo de manera virtual mediante el uso de tecnologías de la información.

Las y los Consejeros Electorales del Consejo General podrán utilizar cualquier documento, insumo o herramienta que coadyuve a la realización de la entrevista.

En atención al principio de máxima publicidad, las cédulas de los aspirantes se harán públicas en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

OCTAVA. Integración de las listas de candidatas y candidatos

Conforme a lo previsto en los artículos 100, párrafos 1 y 3 y 101, párrafos 1, inciso f), 3 y 4 de la Ley General y 24, párrafo 1, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, la Comisión de Vinculación presentará al Consejo General una lista con la totalidad de los nombres de las y los candidatos a ocupar el cargo.

La propuesta de la o el candidato deberá contener un dictamen debidamente fundado y motivado, que incluya todas las etapas del proceso de selección, además de los elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad y capacidad para el cargo de la o el aspirante.

Una vez elaborada la propuesta de la o el candidato, respaldada con el dictamen respectivo, la Comisión de Vinculación deberá someterla a la consideración del Consejo General con una anticipación no menor a setenta y dos horas previas a la sesión que corresponda.

NOVENA. Designaciones

El Consejo General designará a más tardar el día **1 de noviembre de 2018**, por mayoría de ocho votos, a las Consejeras o Consejeros Electorales que iniciarán el encargo de siete años en el Instituto Electoral de Tamaulipas, especificando, en su caso, el periodo o la conclusión del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, párrafo 1, incisos a), g) y jj), de la Ley General, y del Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

La fecha mencionada en el párrafo anterior será tomada como base para determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Base Tercera, párrafos 3 y 4 de la presente Convocatoria.

Con base en los artículos 24, párrafo 9, y 27 párrafo 4 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, en la designación de las o los Consejeros Electorales correspondientes, se procurará observar el principio de paridad de género considerando la integración del órgano superior de dirección del Instituto Electoral de Tamaulipas.

El Consejo General deberá ordenar la publicación del acuerdo de designación en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del estado de Tamaulipas, así como comunicar a las autoridades locales la designación. Asimismo, ordenará a la Secretaría Ejecutiva notificar el acuerdo respectivo a la o el ciudadano designado.

La ciudadana o el ciudadano que haya sido designado como Consejera o Consejero Electoral, deberá acreditar o manifestar bajo protesta de decir verdad, dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación del Acuerdo de designación, que no desempeña ningún empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos relacionados con actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia no remunerados.

La lista que contenga el nombre de las Consejeras o Consejeros Electorales designados será publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

DÉCIMA. Nombramiento y toma de protesta

Las o los ciudadanos que hayan sido designados recibirán el nombramiento que lo acredita como Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto Electoral de Tamaulipas; mismo que contendrá, entre otras cosas el nombre y apellidos, cargo, periodo y fecha de expedición.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados rendirán protesta en la fecha que determine el acuerdo de designación que apruebe el Consejo General. Se rendirá protesta en la sede del Instituto Electoral de Tamaulipas y deberá incluirse el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución Política del estado y las leyes que de ellas emanen, así como el apego a los principios rectores de la función electoral.

Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados no podrán ser reelectos, acorde a lo establecido en el artículo 116, base IV, inciso c), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DÉCIMA PRIMERA. Transparencia

El resultado de cada una de las etapas deberá hacerse público a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y por los demás medios que determine la Comisión de Vinculación, en los términos establecidos para cada etapa en la presente Convocatoria.

La información y documentación que integre los expedientes individuales de las y los aspirantes será confidencial en términos de lo establecido en el artículo 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que no podrá tener otro fin que el previsto en el proceso objeto de la presente Convocatoria, ni ser utilizada o difundida salvo que medie el consentimiento expreso del titular conforme al Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En atención al principio de máxima publicidad, el Instituto realizará la publicación de la información más relevante de cada aspirante, utilizando para este propósito la que se encuentra contenida en el resumen curricular, entregada por cada aspirante al momento de su registro.

DÉCIMA SEGUNDA. Casos no previstos

Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la Comisión de Vinculación, con base en lo dispuesto en el Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Para mayores informes favor de comunicarse a los teléfonos:

Junta Local Ejecutiva	(01-834) 312-06-98 / (01-834) 312-24-87		
Junta Distrital 01	(01-867) 712-40-51 / (01-867) 713-27-60	Junta Distrital 02	(01-899) 922-11-28 / (01-899) 922-44-76
Junta Distrital 03	(01-899) 853-25-91 / (01-899) 853-26-21	Junta Distrital 04	(01-868) 813-99-27 Ext. 101 / 104
Junta Distrital 05	(01-834) 316-94-07 / (01-834) 316-89-84	Junta Distrital 06	(01-831) 232-65-73
Junta Distrital 07	(01-833) 215-75-72 / (01-833) 216-98-29	Junta Distrital 08	(01-833) 217-22-20 / (01-833) 217-22-21
Junta Distrital 09	(01-899) 946-67-45 / (01-899) 946-78-86		

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero y 41, Base V, apartado C, último párrafo; 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo 1, inciso d); 4, párrafo 2; 6, párrafo 2; 29, párrafo 1; 30, párrafo 2; 31, párrafos 1 y 4; 32, párrafo 2, inciso b); 39, párrafo 2; 42, párrafos 5, 6, 8 y 10; 43; 44, párrafo 1, incisos a), g) y jj); 45, párrafo 1, inciso a); 46, párrafo 1, inciso k); 60 inciso e); 99, párrafo 1; 100 y 101, de la Ley General; 73, inciso i) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

CONVOCA:

A las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 100, párrafos 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante Ley General); y artículo 9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, y deseen participar en el proceso de selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a solicitar su registro y presentar su documentación de aspirante conforme a las siguientes:

BASES:

PRIMERA. Aspectos generales

Las y los aspirantes interesados en participar en el proceso de selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, deberán llenar los formatos que para tal efecto se pondrán a disposición en el portal del Instituto www.ine.mx, desde el **23 de julio al 17 de agosto 2018**.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Una vez requisitados los formatos, deberán imprimirse, **verificar que la información capturada se encuentre completa al imprimir el formato** y firmarse. Los formatos tendrán como único propósito recabar la información de las y los aspirantes, por lo que en ningún caso se podrán considerar como una constancia de registro al proceso de selección y designación.

Tanto los formatos como la documentación solicitada en la presente Convocatoria se recibirán del **13 al 17 de agosto de 2018**, en las oficinas de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas o en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).

Quien así lo requiera podrá asistir a las oficinas antes mencionadas para ser auxiliados en el llenado de los formatos.

La recepción de solicitudes debidamente requisitadas se realizará ante los siguientes órganos del Instituto Nacional Electoral:

Secretaría Ejecutiva

Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio A, Planta Alta, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México, C.P. 14610.

Junta Local Ejecutiva

Xicohtécatl No. 7, Colonia Centro, Tlaxcala, Tlax., C. P. 90000.

Junta Distrital 01

Avenida Xicohtécatl No. 2112, Colonia Fátima, Apizaco, Tlax., C. P. 90300.

Junta Distrital 02

Km. 2.5 de la Carretera Ocotlán Santa Ana, Colonia Centro, Tlaxcala, Tlax. C. P. 90800.

Junta Distrital 03

Hidalgo Oriente No. 21, Colonia 1a Sección Centro, Zacatelco, Tlax., C.P. 90740.

Las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 100, párrafo 2 de la Ley General y en el artículo 9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Públicos Locales Electorales, podrán inscribirse como aspirantes al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.

De conformidad con el artículo 13, párrafo 4, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, las y los aspirantes que participen en el proceso de selección y designación en todo momento deberán mantener el cumplimiento de requisitos; de no ser así, la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante Comisión de Vinculación), descartará a la o el aspirante que se encuentre en este supuesto en cualquier etapa del proceso.

SEGUNDA. Cargo y periodo a designar.

El proceso de selección tiene como propósito designar a dos Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, que durarán en su encargo siete años, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 101, párrafo 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

TERCERA. Requisitos.

Las y los interesados en ocupar el cargo referido en la Base Segunda deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
2. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente;
3. Tener más de 30 años cumplidos al día de la designación;
4. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel licenciatura;
5. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
6. Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
7. No haber sido registrado como candidata o candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación;

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

8. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación;
9. No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;
10. No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación como de las entidades federativas, ni subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno. No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni Gobernadora o Gobernador, ni Secretaria o Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser Presidenta o Presidente Municipal, Síndico (a) o Regidor (a) o titular de dependencia de los Ayuntamientos; y
11. No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones o de cualquier otra entidad federativa.

CUARTA. Documentación a entregar.

Las y los interesados deberán presentar la siguiente documentación:

1. Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto;
2. Copia certificada del acta de nacimiento;
3. En caso de no ser originario de la entidad federativa correspondiente, deberá presentar una constancia que acredite una residencia efectiva en la entidad de por lo menos cinco años anteriores a la fecha de designación establecida en la Convocatoria; dicha constancia deberá ser expedida por autoridad competente. En su caso, el documento con el que compruebe ubicarse en una excepción por razón de ausencia del país por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
4. Original y copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, para su certificación;
5. Dos fotografías recientes tamaño infantil a color;
6. Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la solicitud con una antigüedad máxima de tres meses;
7. Copia certificada del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha de expedición mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la Convocatoria para la designación;

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

8. Currículum vitae firmado por la o el aspirante a través del formato que para tal efecto estará disponible en el portal del Instituto, el cual deberá contener, entre otros datos: nombre y apellidos completos, domicilio, teléfonos y correo electrónico, estudios realizados, trayectoria laboral, académica, política, docente y profesional, publicaciones, actividad empresarial, cargos de elección popular, organizaciones de cualquier tipo a las que pertenezca y el carácter de su participación, así como el empleo, cargo o comisión que, en su caso, desempeñe al momento del registro;
9. Resumen curricular con una extensión máxima de una cuartilla con letra Arial 12, para su eventual publicación, por lo que no deberá contener datos personales privados. Para lo anterior, deberá emplear el formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto; y
10. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa (empleando el formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto), en la que se manifieste:
 - a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
 - b) No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
 - c) No haber sido registrado como candidata o candidato a cargo alguno de elección popular durante los cuatro años anteriores a la designación;
 - d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación;
 - e) No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;
 - f) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno federal o de las entidades federativas, ni subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno;
 - g) No ser jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni gobernadora o gobernador, ni secretaria o secretario de gobierno o su equivalente a nivel local;
 - h) No ser jefe o jefa delegacional, presidenta o presidente municipal, síndica o síndico o regidora o regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos;
 - i) No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Consejero Electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones o de cualquier otra entidad federativa;

- j) La aceptación de dar por concluido todo empleo, cargo o comisión en caso de ser designado como Consejera o Consejero Presidente;
- k) Toda la información que, con motivo del proceso de selección a que se refiere la Convocatoria, ha proporcionado o llegue a proporcionar es veraz y toda la documentación que ha entregado o llegue a entregar es auténtica;
- l) La aceptación de sujetarse a la Convocatoria y a las reglas establecidas en el presente proceso de selección; y
- m) Consentimiento para que sus datos personales sean utilizados únicamente para los fines de la convocatoria.

Los formatos para la presentación de los requisitos establecidos en los párrafos 1, 8, 9 y 10, estarán disponibles en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en las oficinas del Instituto Nacional Electoral.

Si fuera el caso de que las y los interesados, con motivo de alguna convocatoria anterior hubieran presentado al Instituto Nacional Electoral copia certificada del acta de nacimiento; del título o cédula profesional de nivel licenciatura y los mismos obraran en los archivos del Instituto, deberán hacerlo del conocimiento en su solicitud de registro de la presente Convocatoria, los cuales se ubicarán en una situación de excepción para exhibirlos, una vez que la autoridad nacional electoral verifique su resguardo documental.

De ser el caso que la solicitud de la o el aspirante se realice el día 17 de agosto de 2018, la Unidad Técnica contará con el término de veinticuatro horas para verificar en sus archivos la existencia de dichos documentos, y en caso de que no cuente con ellos, requerirá a la o el aspirante para que dentro del término de cuarenta y ocho horas los remita digitalizados a través de correo electrónico y de igual forma en forma física, a través de la Junta Local o Distrital de su entidad federativa.

QUINTA. Plazos y horarios para el registro

Las y los aspirantes deberán presentar los formatos referidos en las Bases Primera y Cuarta para solicitar su registro del **13 al 17 de agosto de 2018**, en la Secretaría Ejecutiva, en la Junta Local Ejecutiva o en las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral correspondientes al estado de Tlaxcala, en los domicilios

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

citados en la Base Primera de la presente Convocatoria, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).

SEXTA. Notificaciones.

Todas las notificaciones se harán mediante el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, salvo aquéllas que deban realizarse de manera personal a las y los aspirantes, mismas que se harán mediante el correo electrónico que hayan registrado y que deberán ser acusadas de recibido por los aspirantes de forma inmediata a su recepción, en el entendido de que quienes no lo hagan dentro de las veinticuatro horas posteriores a su envío, se darán por debidamente notificados.

Las ciudadanas o ciudadanos designados por el Consejo General serán notificados en los términos del artículo 24, párrafo 7, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

SÉPTIMA. Etapas del proceso de selección y designación.

El proceso de selección de las Consejeras o Consejeros Electorales del órgano superior de dirección del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones se desarrollará de conformidad con las siguientes etapas:

1. Registro de aspirantes. Las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tlaxcala, así como la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral recibirán, en las fechas establecidas en la Base Quinta de la presente Convocatoria, las solicitudes y la documentación que presenten las y los aspirantes o por persona autorizada por escrito, siempre y cuando en la solicitud aparezca la firma autógrafa de dichos aspirantes para ocupar el cargo convocado. Cada órgano receptor será el responsable de concentrar las solicitudes y documentación correspondiente para la integración de los expedientes.

En las sedes de las Juntas Local y Distritales del estado de Tlaxcala, así como de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, se proporcionará el apoyo necesario para llevar a cabo el registro en el sistema habilitado para la presente Convocatoria.

Al momento de presentar la solicitud de registro y entregar la documentación correspondiente, las y los aspirantes recibirán un acuse con un folio asignado y la descripción de la información y documentación entregada al Instituto, el cual

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

deberán firmar de conformidad. El mencionado comprobante tendrá como único propósito acusar de recibida la documentación ahí referida, por lo que en ningún caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos de esta Convocatoria.

La Junta Local Ejecutiva será la responsable de concentrar los expedientes de las y los aspirantes que se presenten ante la misma y ante las Juntas Distritales Ejecutivas, elaborando una lista de aquéllos que presentaron su solicitud, señalando las inconsistencias u omisiones en los documentos presentados, las cuales serán puestas a consideración de la Comisión de Vinculación.

A más tardar el **20 de agosto de 2018**, la Junta Local Ejecutiva remitirá los expedientes a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante Unidad de Vinculación) para que ésta los entregue tanto en físico como en versión electrónica al Presidente de la Comisión de Vinculación. Al resto de las y los Consejeros del Consejo General se les entregará una copia en medio electrónico.

Los expedientes originales estarán bajo resguardo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación, quien los pondrá a disposición para consulta de las y los integrantes del Consejo General y de la propia Comisión.

La Secretaría Ejecutiva y las Juntas Local y Distritales no podrán descartar o rechazar solicitud alguna que se les presente. En caso de que algún aspirante no entregue la totalidad de la documentación, podrá subsanar la omisión siempre y cuando se encuentre dentro del periodo de registro establecido en la presente Convocatoria o a solicitud expresa de la Unidad de Vinculación.

2. Verificación de los requisitos legales. La Comisión de Vinculación, con el apoyo de los grupos de trabajo que en su caso se conformen, verificará el cumplimiento de los requisitos legales, y aprobará, a más tardar el **28 de agosto de 2018**, el Acuerdo que contenga la relación con los nombres y apellidos de las y los aspirantes que cumplen con todos los requisitos y ordenará su publicación, agregando el resumen curricular de cada uno de los aspirantes.

En el mismo Acuerdo, la Comisión de Vinculación aprobará la sede y horario en que se aplicará el examen de conocimientos.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

La Unidad de Vinculación publicará la guía de estudio y las condiciones del examen de conocimientos, en la misma fecha en la que se habiliten los formatos de registro de aspirantes en la página del Instituto; es decir, el **23 de julio**.

La información prevista en los párrafos anteriores deberá ser publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas en el estado de Tlaxcala.

3. Examen de conocimientos. Las y los aspirantes que hayan cumplido con todos los requisitos legales serán convocados a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, para presentar el examen de conocimientos, mismo que tendrá verificativo el día **1 de septiembre de 2018**, en la sede previamente definida y publicada en el portal del Instituto por la Unidad de Vinculación. La fecha para la presentación del examen será inamovible, por lo que no podrá aplicarse en otra diversa, por ninguna causa.

El examen comprenderá dos apartados: el primero, de competencias básicas, que comprende las áreas comunicativa y matemática, el cual tendrá una ponderación en la calificación de 40%. El segundo será de conocimientos técnicos, y comprenderá las áreas teórico-normativa y de procedimientos electorales, el cual tendrá una ponderación en la calificación de 60%.

La estructura y el contenido del examen de conocimientos serán debidamente establecidos en la guía de estudios que se publicará en la página del Instituto.

Las y los aspirantes deberán identificarse con credencial para votar o identificación oficial con fotografía vigente. La aplicación y evaluación del examen de conocimientos estará a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).

La Comisión de Vinculación solicitará al Ceneval que la entrega de los resultados se realice con listas diferenciadas de mujeres y hombres, en orden de mayor a menor calificación. De tal manera que pasarán a la siguiente etapa 12 aspirantes mujeres y 12 aspirantes hombres que obtengan la mejor calificación, siempre y cuando ésta sea igual o mayor a seis. En caso de empate en la posición número 12, accederán las y los aspirantes que se encuentren en este supuesto.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Los resultados del examen de conocimientos se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día **13 de septiembre de 2018**, ordenados de mayor a menor calificación y diferenciando las listas de la forma siguiente:

- a) Nombre de las aspirantes que acceden a la siguiente etapa;
- b) Nombre de los aspirantes que acceden a la siguiente etapa; y
- c) Folios de las y los aspirantes que no pasan a la siguiente etapa.

A partir de dicha publicación, las y los aspirantes que no hubiesen accedido a la siguiente etapa, tendrán hasta el día **17 de septiembre de 2018** para en su caso, solicitar por escrito al correo electrónico revisiones.utvopl@ine.mx o ante la Unidad de Vinculación, la revisión del examen, misma que tendrá verificativo a partir del día **18 de septiembre de 2018**. La Unidad de Vinculación notificará a las y los solicitantes a través del correo electrónico que hayan proporcionado, la fecha, hora y lugar para la realización de la sesión de revisión. En todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la Ciudad de México.

Para la revisión del examen, se llevará a cabo una sesión por cada solicitante y a la misma acudirán personalmente la o el aspirante, un representante de Ceneval, y un representante de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación o la o el funcionario que ésta designe, quien levantará un acta de revisión de examen que deberá ser firmada por quienes intervengan en dicho acto. Para el desahogo de dicha sesión, la Institución evaluadora del examen proporcionará a la Secretaría Técnica todos los elementos necesarios para salvaguardar el derecho de audiencia y debido proceso del solicitante.

Si los resultados de la revisión realizada determinan que la o el sustentante obtuvo una calificación igual o superior a la posición 12, la Comisión de Vinculación ordenará su inclusión en la siguiente etapa, sin perjuicio de las y los aspirantes ya incluidos en las listas publicadas.

Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

4. Ensayo presencial. Las y los aspirantes que acrediten la etapa del examen de conocimientos, presentarán un ensayo de manera presencial, el **22 de septiembre de 2018**.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

El Consejo General aprobará los lineamientos que establezcan lo siguiente:

- a) La institución de educación superior, de investigación o evaluación responsable de la aplicación y calificación de los ensayos presenciales;
- b) Criterios para la elaboración y dictamen de los ensayos presenciales;
- c) Requisitos formales para la aplicación del ensayo; y
- d) Fecha de entrega de resultados por parte de la institución educativa designada.

Los lineamientos aprobados serán notificados a las y los aspirantes, así como las sedes y horarios de aplicación, a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. La fecha para la elaboración del ensayo será inamovible, por lo que no podrá presentarse en otra fecha, bajo ningún motivo.

A través de la elaboración y presentación del ensayo, las y los aspirantes serán evaluados sobre la habilidad que posean para definir, situar y delimitar un problema del ámbito electoral, a partir de la delimitación y contextualización de un problema central, de la identificación de los actores relevantes y los escenarios posibles, analizar los riesgos y oportunidades, para desarrollar propuesta operativas a efecto de gestionar o resolver los problemas identificados; no así sobre su postura u opinión particular con respecto al tema desarrollado. De esta manera, el ensayo permitirá calificar la capacidad de análisis, el desarrollo argumentativo, el planteamiento del problema y el desarrollo de escenarios y posibles soluciones, con el objeto de establecer una estrategia y una ruta crítica de acción con base en las atribuciones y competencias legales de los Organismos Públicos Locales.

La aplicación de los ensayos y su dictamen estará a cargo de la institución designada, que determinará quiénes son las y los aspirantes cuyo ensayo sea dictaminado como idóneo. Los ensayos serán evaluados por tres académicos que determine la propia institución y será idóneo el ensayo de la o el aspirante que obtenga al menos dos dictámenes favorables.

La institución designada entregará los tres dictámenes de cada uno de las y los aspirantes a la Comisión de Vinculación, a través de la Unidad de Vinculación a más tardar el día **11 de octubre de 2018**.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Los resultados del ensayo se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día **11 de octubre de 2018**, en listas diferenciadas, de acuerdo con lo siguiente:

- a) Nombre de las aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
- b) Nombre de los aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
- c) Folios de las y los aspirantes con dictamen de ensayo no idóneo.

Una vez que se tenga la lista de las y los aspirantes que hayan resultado con dictamen idóneo en el ensayo, la Comisión de Vinculación la hará de conocimiento público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y la notificará a las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, quienes podrán presentar por escrito, dentro de los cinco días hábiles siguientes, ante la misma Comisión, las observaciones y comentarios que consideren convenientes respecto de cada una de las y los aspirantes; el escrito deberá acompañarse de los elementos objetivos que sustenten o corroboren sus afirmaciones.

A partir de dicha publicación, aquellos aspirantes cuyo ensayo haya sido dictaminado como no idóneo, tendrán derecho a solicitar por escrito, hasta el día **15 de octubre de 2018**, su revisión ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tlaxcala o directamente ante la Unidad de Vinculación. La diligencia de revisión de ensayo deberá efectuarse a partir del día **16 de octubre de 2018**. En todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la Ciudad de México.

Si los resultados de la revisión realizada arrojan que el ensayo de la o el aspirante obtuvo un dictamen idóneo, la Comisión de Vinculación lo hará del conocimiento de las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para que en un término de dos días hábiles emitan las observaciones a que haya lugar en los términos precitados.

Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

Concluido el plazo de observaciones de las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, la Comisión de Vinculación hará del conocimiento público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, la relación de quienes, al no tener algún impedimento legal y habiendo aprobado las etapas anteriores, pasarán a la etapa

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

de valoración curricular y entrevista, conforme al calendario que apruebe la Comisión de Vinculación para tal efecto.

5. Valoración curricular y entrevista. Para los efectos de esta Convocatoria, la valoración curricular y la entrevista serán consideradas una misma etapa.

Las y los aspirantes cuyo ensayo resulte idóneo y se considere que no existen elementos objetivos aportados por las y los representantes de los partidos políticos o por Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para descalificarlos como aspirantes, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista.

El Consejo General, a propuesta de la Comisión de Vinculación, aprobará los criterios para realizar la valoración curricular y la entrevista, los que deberán considerar al menos lo siguiente:

- a) Propósito;
- b) Responsables de conducir las entrevistas;
- c) Procedimiento para la calificación;
- d) Las competencias a valorar;
- e) Ponderación que se utilizará para la calificación;
- f) Instrumento que se utilizará para la calificación.

Los criterios que apruebe el Consejo General serán notificados a las y los aspirantes a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx

Esta etapa estará a cargo de las y los Consejeros Electorales del Instituto, los cuales conformarán grupos de entrevistadores.

Al efecto, se procurará un equilibrio entre géneros en la conformación de las listas de las y los aspirantes que accedan a dicha etapa, para lo cual, la Comisión de Vinculación integrará las listas diferenciadas de hombres y mujeres cuyo ensayo presencial haya sido dictaminado como idóneo.

Las entrevistas se realizarán conforme al calendario y sedes que previamente apruebe la Comisión de Vinculación. La información sobre el calendario y la sede se publicará en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. Asimismo, se notificará a las y los aspirantes al correo electrónico proporcionado por los mismos, debiendo acusar de recibida dicha actuación. De la misma forma, se publicará en los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tlaxcala.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Las entrevistas serán transmitidas en tiempo real en el portal del Instituto www.ine.mx, serán grabadas en video y estarán disponibles en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral.

En la etapa de valoración curricular y entrevista se identificará que el perfil de las y los aspirantes se apegue a los principios rectores de la función electoral y cuente con las competencias indispensables para determinar la idoneidad de las y los aspirantes para el desempeño del cargo.

La entrevista será presencial, se realizará en panel con al menos tres Consejeros o Consejeras Electorales, y deberá atender al proceso siguiente:

- a) **Antes de la entrevista.** Las y los aspirantes deberán presentarse por lo menos 30 minutos previos a la hora de inicio de la entrevista.
- b) **Durante la entrevista.** Se conforma de tres etapas: apertura, desarrollo y cierre; tendrá una duración de hasta 20 minutos.
- c) **Después de la entrevista.** Al finalizar el proceso de entrevista, cada Consejera o Consejero Electoral deberá asentar el valor cuantificable de cada uno de los rubros que conforman la cédula de valoración curricular y entrevista.

Excepcionalmente, previa causa justificada, las entrevistas podrán llevarse a cabo de manera virtual mediante el uso de tecnologías de la información.

Las y los Consejeros Electorales del Consejo General podrán utilizar cualquier documento, insumo o herramienta que coadyuve a la realización de la entrevista.

En atención al principio de máxima publicidad, las cédulas de los aspirantes se harán públicas en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

OCTAVA. Integración de las listas de candidatas y candidatos

Conforme a lo previsto en los artículos 100, párrafos 1 y 3 y 101, párrafos 1, inciso f), 3 y 4 de la Ley General y 24, párrafo 1, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, la Comisión de Vinculación presentará al Consejo General una lista con la totalidad de los nombres de las y los candidatos a ocupar el cargo.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

La propuesta de la o el candidato deberá contener un dictamen debidamente fundado y motivado, que incluya todas las etapas del proceso de selección, además de los elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad y capacidad para el cargo de la o el aspirante.

Una vez elaborada la propuesta de la o el candidato, respaldada con el dictamen respectivo, la Comisión de Vinculación deberá someterla a la consideración del Consejo General con una anticipación no menor a setenta y dos horas previas a la sesión que corresponda.

NOVENA. Designaciones

El Consejo General designará a más tardar el día **1 de noviembre de 2018**, por mayoría de ocho votos, a las Consejeras o Consejeros Electorales que iniciarán el encargo de siete años en el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, especificando, en su caso, el periodo o la conclusión del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, párrafo 1, incisos a), g) y jj), de la Ley General, y del Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

La fecha mencionada en el párrafo anterior será tomada como base para determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Base Tercera, párrafos 3 y 4 de la presente Convocatoria.

Con base en los artículos 24, párrafo 9, y 27 párrafo 4 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, en la designación de las o los Consejeros Electorales correspondientes, se procurará observar el principio de paridad de género considerando la integración del órgano superior de dirección del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.

El Consejo General deberá ordenar la publicación del acuerdo de designación en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del estado de Tlaxcala, así como comunicar a las autoridades locales la designación. Asimismo, ordenará a la Secretaría Ejecutiva notificar el acuerdo respectivo a la o el ciudadano designado.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

La ciudadana o el ciudadano que haya sido designado como Consejera o Consejero Electoral, deberá acreditar o manifestar bajo protesta de decir verdad, dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación del Acuerdo de designación, que no desempeña ningún empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos relacionados con actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia no remunerados.

La lista que contenga el nombre de las Consejeras o Consejeros Electorales designados será publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

DÉCIMA. Nombramiento y toma de protesta

Las o los ciudadanos que hayan sido designados recibirán el nombramiento que lo acredita como Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; mismo que contendrá, entre otras cosas el nombre y apellidos, cargo, periodo y fecha de expedición.

Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados rendirán protesta en la fecha que determine el acuerdo de designación que apruebe el Consejo General. Se rendirá protesta en la sede del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y deberá incluirse el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución Política del estado y las leyes que de ellas emanen, así como el apego a los principios rectores de la función electoral.

Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados no podrán ser reelectos, acorde a lo establecido en el artículo 116, base IV, inciso c), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DÉCIMA PRIMERA. Transparencia

El resultado de cada una de las etapas deberá hacerse público a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y por los demás medios que determine la Comisión de Vinculación, en los términos establecidos para cada etapa en la presente Convocatoria.

La información y documentación que integre los expedientes individuales de las y los aspirantes será confidencial en términos de lo establecido en el artículo 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que no podrá tener otro fin que el previsto en el proceso objeto de la presente Convocatoria, ni ser utilizada o difundida salvo que medie el

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

consentimiento expreso del titular conforme al Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En atención al principio de máxima publicidad, el Instituto realizará la publicación de la información más relevante de cada aspirante, utilizando para este propósito la que se encuentra contenida en el resumen curricular, entregada por cada aspirante al momento de su registro.

DÉCIMA SEGUNDA. Casos no previstos

Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la Comisión de Vinculación, con base en lo dispuesto en el Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

Para mayores informes favor de comunicarse a los teléfonos:

Junta Local Ejecutiva	(01-246) 462-23-48 / (01-246) 462-41-99	
Junta Distrital 01	(01-241) 417-06-03 / (01-241) 417-56-82	Junta Distrital 02 (01-246) 462-71-30 / (01-246) 462-95-50
Junta Distrital 03	(01-246) 415-90-12 / (01-246) 415-90-13	

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero y 41, Base V, apartado C, último párrafo; 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo 1, inciso d); 4, párrafo 2; 6, párrafo 2; 29, párrafo 1; 30, párrafo 2; 31, párrafos 1 y 4; 32, párrafo 2, inciso b); 39, párrafo 2; 42, párrafos 5, 6, 8 y 10; 43; 44, párrafo 1, incisos a), g) y jj); 45, párrafo 1, inciso a); 46, párrafo 1, inciso k); 60 inciso e); 99, párrafo 1; 100 y 101, de la Ley General; 73, inciso i) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

CONVOCA:

A las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 100, párrafos 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante Ley General); y artículo 9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, y deseen participar en el proceso de selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, a solicitar su registro y presentar su documentación de aspirante conforme a las siguientes:

BASES:

PRIMERA. Aspectos generales

Las y los aspirantes interesados en participar en el proceso de selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, deberán llenar los formatos que para tal efecto se pondrán a disposición en el portal del Instituto www.ine.mx, desde el **23 de julio al 17 de agosto 2018**.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Una vez requisitados los formatos, deberán imprimirse, **verificar que la información capturada se encuentre completa al imprimir el formato** y firmarse. Los formatos tendrán como único propósito recabar la información de las y los aspirantes, por lo que en ningún caso se podrán considerar como una constancia de registro al proceso de selección y designación.

Tanto los formatos como la documentación solicitada en la presente Convocatoria se recibirán del **13 al 17 de agosto de 2018**, en las oficinas de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas o en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).

Quien así lo requiera podrá asistir a las oficinas antes mencionadas para ser auxiliados en el llenado de los formatos.

La recepción de solicitudes debidamente requisitadas se realizará ante los siguientes órganos del Instituto Nacional Electoral:

Secretaría Ejecutiva

Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio A, Planta Alta, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México, C.P. 14610.

Junta Local Ejecutiva

Av. Manuel Ávila Camacho No. 119, Colonia Centro, Xalapa, Veracruz, C. P. 91000.

Junta Distrital 01

Calle Venustiano Carranza No. 7, Colonia Etienne, Pánuco, Veracruz, C. P. 93990.

Junta Distrital 02

Calle Ignacio Allende 96, esquina 16 de Septiembre, Colonia Centro, Tantoyuca, Veracruz, C. P. 92120.

Junta Distrital 03

González Ortega No. 36, Colonia Centro, Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, C. P. 92800.

Junta Distrital 04

Pátzcuaro No. 494, esquina con J. B. Lobos,
Fraccionamiento Laguna del Valle, Veracruz, Veracruz, C. P. 91779.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Junta Distrital 05

República del Salvador No. 910, Colonia 27 de Septiembre, Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, C. P. 93320.

Junta Distrital 06

Monte Albán No. 203, Colonia Doctores, Papantla de Olarte, Veracruz, C. P. 93440.

Junta Distrital 07

Av. Agustín Lara No. 3, Colonia Yucatán, Martínez de la Torre, Veracruz, C. P. 93607.

Junta Distrital 08

Transversal 1 No. 303, esquina Constituyentes de 1857, Colonia Azteca, Xalapa, Veracruz, C. P. 91180.

Junta Distrital 09

Ignacio Zaragoza No. 44, Zona Centro, Coatepec, Veracruz, C. P. 91500.

Junta Distrital 10

Av. 20 de Noviembre Oriente No. 191, Colonia José Cardel, Xalapa-Enriquez, Veracruz, C. P. 91030.

Junta Distrital 11

Av. Revolución No. 404, Colonia Centro, Coatzacoalcos, Veracruz, C. P. 96400.

Junta Distrital 12

Av. Nicolás Bravo No. 347 Altos, Zona Centro, C. P. 91700, Veracruz, Veracruz

Junta Distrital 13

Av. 4 Poniente No. 625, Colonia Centro, C. P. 94100, Huatusco, Veracruz

Junta Distrital 14

Av. 18 De Marzo No. 49, Colonia Obrera, C. P. 96740, Minatitlán, Veracruz

Junta Distrital 15

Poniente 7 No. 431, Zona Centro, Orizaba, Veracruz, C. P. 94300.

Junta Distrital 16

Avenida 25 No. 725-A, esquina Calle 9, Fraccionamiento El Carmen, Córdoba, Veracruz, C. P. 94580.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Junta Distrital 17

Jose Maria Morelos y Pavón 940, Colonia Centro, Cosamaloapan, Veracruz, C. P. 95400.

Junta Distrital 18

José María Morelos No. 8, Barrio de Guadalupe, Zongolica, Veracruz, C. P. 95000.

Junta Distrital 19

2 de Abril No. 2, Zona Centro, San Andrés Tuxtla, Veracruz, C. P. 95700.

Junta Distrital 20

Carretera Transístmica No. 70, Barrio Primero, Zona Centro, Cosoleacaque, Veracruz, C. P. 96350.

Las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 100, párrafo 2 de la Ley General y en el artículo 9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, podrán inscribirse como aspirantes al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

De conformidad con el artículo 13, párrafo 4, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, las y los aspirantes que participen en el proceso de selección y designación en todo momento deberán mantener el cumplimiento de requisitos; de no ser así, la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante Comisión de Vinculación), descartará a la o el aspirante que se encuentre en este supuesto en cualquier etapa del proceso.

SEGUNDA. Cargo y periodo a designar.

El proceso de selección tiene como propósito designar a dos Consejeras o Consejeros Electorales del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, que durarán en su encargo siete años, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 101, párrafo 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

TERCERA. Requisitos.

Las y los interesados en ocupar el cargo referido en la Base Segunda deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
2. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente;
3. Tener más de 30 años cumplidos al día de la designación;
4. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel licenciatura;
5. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
6. Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
7. No haber sido registrado como candidata o candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación;
8. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación;
9. No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;
10. No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación como de las entidades federativas, ni subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno. No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni Gobernadora o Gobernador, ni Secretaria o Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser Presidenta o Presidente Municipal, Síndico (a) o Regidor (a) o titular de dependencia de los Ayuntamientos; y
11. No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del Organismo Público Local Electoral de Veracruz o de cualquier otra entidad federativa.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

CUARTA. Documentación a entregar.

Las y los interesados deberán presentar la siguiente documentación:

1. Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto;
2. Copia certificada del acta de nacimiento;
3. En caso de no ser originario de la entidad federativa correspondiente, deberá presentar una constancia que acredite una residencia efectiva en la entidad de por lo menos cinco años anteriores a la fecha de designación establecida en la Convocatoria; dicha constancia deberá ser expedida por autoridad competente. En su caso, el documento con el que compruebe ubicarse en una excepción por razón de ausencia del país por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
4. Original y copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, para su certificación;
5. Dos fotografías recientes tamaño infantil a color;
6. Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la solicitud con una antigüedad máxima de tres meses;
7. Copia certificada del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha de expedición mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la Convocatoria para la designación;
8. Currículum vitae firmado por la o el aspirante a través del formato que para tal efecto estará disponible en el portal del Instituto, el cual deberá contener, entre otros datos: nombre y apellidos completos, domicilio, teléfonos y correo electrónico, estudios realizados, trayectoria laboral, académica, política, docente y profesional, publicaciones, actividad empresarial, cargos de elección popular, organizaciones de cualquier tipo a las que pertenezca y el carácter de su participación, así como el empleo, cargo o comisión que, en su caso, desempeñe al momento del registro;
9. Resumen curricular con una extensión máxima de una cuartilla con letra Arial 12, para su eventual publicación, por lo que no deberá contener datos personales privados. Para lo anterior, deberá emplear el formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto; y
10. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa (empleando el formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto), en la que se manifieste:
 - a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

- b) No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
- c) No haber sido registrado como candidata o candidato a cargo alguno de elección popular durante los cuatro años anteriores a la designación;
- d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación;
- e) No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;
- f) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno federal o de las entidades federativas, ni subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno;
- g) No ser jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni gobernadora o gobernador, ni secretaria o secretario de gobierno o su equivalente a nivel local;
- h) No ser jefe o jefa delegacional, presidenta o presidente municipal, síndica o síndico o regidora o regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos;
- i) No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del Organismo Público Local Electoral de Veracruz o de cualquier otra entidad federativa;
- j) La aceptación de dar por concluido todo empleo, cargo o comisión en caso de ser designado como Consejera o Consejero Presidente;
- k) Toda la información que, con motivo del proceso de selección a que se refiere la Convocatoria, ha proporcionado o llegue a proporcionar es veraz y toda la documentación que ha entregado o llegue a entregar es auténtica;
- l) La aceptación de sujetarse a la Convocatoria y a las reglas establecidas en el presente proceso de selección; y
- m) Consentimiento para que sus datos personales sean utilizados únicamente para los fines de la convocatoria.

Los formatos para la presentación de los requisitos establecidos en los párrafos 1, 8, 9 y 10, estarán disponibles en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en las oficinas del Instituto Nacional Electoral.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Si fuera el caso de que las y los interesados, con motivo de alguna convocatoria anterior hubieran presentado al Instituto Nacional Electoral copia certificada del acta de nacimiento; del título o cédula profesional de nivel licenciatura y los mismos obraran en los archivos del Instituto, deberán hacerlo del conocimiento en su solicitud de registro de la presente Convocatoria, los cuales se ubicarán en una situación de excepción para exhibirlos, una vez que la autoridad nacional electoral verifique su resguardo documental.

De ser el caso que la solicitud de la o el aspirante se realice el día 17 de agosto de 2018, la Unidad Técnica contará con el término de veinticuatro horas para verificar en sus archivos la existencia de dichos documentos, y en caso de que no cuente con ellos, requerirá a la o el aspirante para que dentro del término de cuarenta y ocho horas los remita digitalizados a través de correo electrónico y de igual forma en forma física, a través de la Junta Local o Distrital de su entidad federativa.

QUINTA. Plazos y horarios para el registro

Las y los aspirantes deberán presentar los formatos referidos en las Bases Primera y Cuarta para solicitar su registro del **13 al 17 de agosto de 2018**, en la Secretaría Ejecutiva, en la Junta Local Ejecutiva o en las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral correspondientes al estado de Veracruz, en los domicilios citados en la Base Primera de la presente Convocatoria, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).

SEXTA. Notificaciones.

Todas las notificaciones se harán mediante el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, salvo aquéllas que deban realizarse de manera personal a las y los aspirantes, mismas que se harán mediante el correo electrónico que hayan registrado y que deberán ser acusadas de recibido por los aspirantes de forma inmediata a su recepción, en el entendido de que quienes no lo hagan dentro de las veinticuatro horas posteriores a su envío, se darán por debidamente notificados.

Las ciudadanas o ciudadanos designados por el Consejo General serán notificados en los términos del artículo 24, párrafo 7, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

SÉPTIMA. Etapas del proceso de selección y designación.

El proceso de selección de las Consejeras o Consejeros Electorales del órgano superior de dirección del Organismo Público Local Electoral de Veracruz se desarrollará de conformidad con las siguientes etapas:

1. Registro de aspirantes. Las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en el estado de Veracruz, así como la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral recibirán, en las fechas establecidas en la Base Quinta de la presente Convocatoria, las solicitudes y la documentación que presenten las y los aspirantes o por persona autorizada por escrito, siempre y cuando en la solicitud aparezca la firma autógrafa de dichos aspirantes para ocupar el cargo convocado. Cada órgano receptor será el responsable de concentrar las solicitudes y documentación correspondiente para la integración de los expedientes.

En las sedes de las Juntas Local y Distritales del estado de Veracruz, así como de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, se proporcionará el apoyo necesario para llevar a cabo el registro en el sistema habilitado para la presente Convocatoria.

Al momento de presentar la solicitud de registro y entregar la documentación correspondiente, las y los aspirantes recibirán un acuse con un folio asignado y la descripción de la información y documentación entregada al Instituto, el cual deberán firmar de conformidad. El mencionado comprobante tendrá como único propósito acusar de recibida la documentación ahí referida, por lo que en ningún caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos de esta Convocatoria.

La Junta Local Ejecutiva será la responsable de concentrar los expedientes de las y los aspirantes que se presenten ante la misma y ante las Juntas Distritales Ejecutivas, elaborando una lista de aquéllos que presentaron su solicitud, señalando las inconsistencias u omisiones en los documentos presentados, las cuales serán puestas a consideración de la Comisión de Vinculación.

A más tardar el **20 de agosto de 2018**, la Junta Local Ejecutiva remitirá los expedientes a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante Unidad de Vinculación) para que ésta los entregue tanto en físico como en versión electrónica al Presidente de la Comisión de Vinculación. Al resto de las y los Consejeros del Consejo General se les entregará una copia en medio electrónico.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Los expedientes originales estarán bajo resguardo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación, quien los pondrá a disposición para consulta de las y los integrantes del Consejo General y de la propia Comisión.

La Secretaría Ejecutiva y las Juntas Local y Distritales no podrán descartar o rechazar solicitud alguna que se les presente. En caso de que algún aspirante no entregue la totalidad de la documentación, podrá subsanar la omisión siempre y cuando se encuentre dentro del periodo de registro establecido en la presente Convocatoria o a solicitud expresa de la Unidad de Vinculación.

2. Verificación de los requisitos legales. La Comisión de Vinculación, con el apoyo de los grupos de trabajo que en su caso se conformen, verificará el cumplimiento de los requisitos legales, y aprobará, a más tardar el **28 de agosto de 2018**, el Acuerdo que contenga la relación con los nombres y apellidos de las y los aspirantes que cumplen con todos los requisitos y ordenará su publicación, agregando el resumen curricular de cada uno de los aspirantes.

En el mismo Acuerdo, la Comisión de Vinculación aprobará la sede y horario en que se aplicará el examen de conocimientos.

La Unidad de Vinculación publicará la guía de estudio y las condiciones del examen de conocimientos, en la misma fecha en la que se habiliten los formatos de registro de aspirantes en la página del Instituto; es decir, el **23 de julio**.

La información prevista en los párrafos anteriores deberá ser publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas en el estado de Veracruz.

3. Examen de conocimientos. Las y los aspirantes que hayan cumplido con todos los requisitos legales serán convocados a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, para presentar el examen de conocimientos, mismo que tendrá verificativo el día **1 de septiembre de 2018**, en la sede previamente definida y publicada en el portal del Instituto por la Unidad de Vinculación. La fecha para la presentación del examen será inamovible, por lo que no podrá aplicarse en otra diversa, por ninguna causa.

El examen comprenderá dos apartados: el primero, de competencias básicas, que comprende las áreas comunicativa y matemática, el cual tendrá una ponderación en la calificación de 40%. El segundo será de conocimientos técnicos, y

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

comprenderá las áreas teórico-normativa y de procedimientos electorales, el cual tendrá una ponderación en la calificación de 60%.

La estructura y el contenido del examen de conocimientos serán debidamente establecidos en la guía de estudios que se publicará en la página del Instituto.

Las y los aspirantes deberán identificarse con credencial para votar o identificación oficial con fotografía vigente. La aplicación y evaluación del examen de conocimientos estará a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).

La Comisión de Vinculación solicitará al Ceneval que la entrega de los resultados se realice con listas diferenciadas de mujeres y hombres, en orden de mayor a menor calificación. De tal manera que pasarán a la siguiente etapa 12 aspirantes mujeres y 12 aspirantes hombres que obtengan la mejor calificación, siempre y cuando ésta sea igual o mayor a seis. En caso de empate en la posición número 12, accederán las y los aspirantes que se encuentren en este supuesto.

Los resultados del examen de conocimientos se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día **13 de septiembre de 2018**, ordenados de mayor a menor calificación y diferenciando las listas de la forma siguiente:

- a) Nombre de las aspirantes que acceden a la siguiente etapa;
- b) Nombre de los aspirantes que acceden a la siguiente etapa; y
- c) Folios de las y los aspirantes que no pasan a la siguiente etapa.

A partir de dicha publicación, las y los aspirantes que no hubiesen accedido a la siguiente etapa, tendrán hasta el día **17 de septiembre de 2018** para en su caso, solicitar por escrito al correo electrónico revisiones.utvopl@ine.mx o ante la Unidad de Vinculación, la revisión del examen, misma que tendrá verificativo a partir del día **18 de septiembre de 2018**. La Unidad de Vinculación notificará a las y los solicitantes a través del correo electrónico que hayan proporcionado, la fecha, hora y lugar para la realización de la sesión de revisión. En todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la Ciudad de México.

Para la revisión del examen, se llevará a cabo una sesión por cada solicitante y a la misma acudirán personalmente la o el aspirante, un representante de Ceneval, y un representante de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación o la o el

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

funcionario que ésta designe, quien levantará un acta de revisión de examen que deberá ser firmada por quienes intervengan en dicho acto. Para el desahogo de dicha sesión, la Institución evaluadora del examen proporcionará a la Secretaría Técnica todos los elementos necesarios para salvaguardar el derecho de audiencia y debido proceso del solicitante.

Si los resultados de la revisión realizada determinan que la o el sustentante obtuvo una calificación igual o superior a la posición 12, la Comisión de Vinculación ordenará su inclusión en la siguiente etapa, sin perjuicio de las y los aspirantes ya incluidos en las listas publicadas.

Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

4. Ensayo presencial. Las y los aspirantes que acrediten la etapa del examen de conocimientos, presentarán un ensayo de manera presencial, el **22 de septiembre de 2018**.

El Consejo General aprobará los lineamientos que establezcan lo siguiente:

- a) La institución de educación superior, de investigación o evaluación responsable de la aplicación y calificación de los ensayos presenciales;
- b) Criterios para la elaboración y dictamen de los ensayos presenciales;
- c) Requisitos formales para la aplicación del ensayo; y
- d) Fecha de entrega de resultados por parte de la institución educativa designada.

Los lineamientos aprobados serán notificados a las y los aspirantes, así como las sedes y horarios de aplicación, a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. La fecha para la elaboración del ensayo será inamovible, por lo que no podrá presentarse en otra fecha, bajo ningún motivo.

A través de la elaboración y presentación del ensayo, las y los aspirantes serán evaluados sobre la habilidad que posean para definir, situar y delimitar un problema del ámbito electoral, a partir de la delimitación y contextualización de un problema central, de la identificación de los actores relevantes y los escenarios posibles, analizar los riesgos y oportunidades, para desarrollar propuesta operativas a efecto de gestionar o resolver los problemas identificados; no así sobre su postura u opinión particular con respecto al tema desarrollado. De esta manera, el ensayo permitirá calificar la capacidad de análisis, el desarrollo argumentativo, el

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

planteamiento del problema y el desarrollo de escenarios y posibles soluciones, con el objeto de establecer una estrategia y una ruta crítica de acción con base en las atribuciones y competencias legales de los Organismos Públicos Locales.

La aplicación de los ensayos y su dictamen estará a cargo de la institución designada, que determinará quiénes son las y los aspirantes cuyo ensayo sea dictaminado como idóneo. Los ensayos serán evaluados por tres académicos que determine la propia institución y será idóneo el ensayo de la o el aspirante que obtenga al menos dos dictámenes favorables.

La institución designada entregará los tres dictámenes de cada uno de las y los aspirantes a la Comisión de Vinculación, a través de la Unidad de Vinculación a más tardar el día **11 de octubre de 2018**.

Los resultados del ensayo se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día **11 de octubre de 2018**, en listas diferenciadas, de acuerdo con lo siguiente:

- a) Nombre de las aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
- b) Nombre de los aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
- c) Folios de las y los aspirantes con dictamen de ensayo no idóneo.

Una vez que se tenga la lista de las y los aspirantes que hayan resultado con dictamen idóneo en el ensayo, la Comisión de Vinculación la hará de conocimiento público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y la notificará a las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, quienes podrán presentar por escrito, dentro de los cinco días hábiles siguientes, ante la misma Comisión, las observaciones y comentarios que consideren convenientes respecto de cada una de las y los aspirantes; el escrito deberá acompañarse de los elementos objetivos que sustenten o corroboren sus afirmaciones.

A partir de dicha publicación, aquellos aspirantes cuyo ensayo haya sido dictaminado como no idóneo, tendrán derecho a solicitar por escrito, hasta el día **15 de octubre de 2018**, su revisión ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Veracruz o directamente ante la Unidad de Vinculación. La diligencia de revisión de ensayo deberá efectuarse a partir del día **16 de octubre de 2018**. En todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la Ciudad de México.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Si los resultados de la revisión realizada arrojan que el ensayo de la o el aspirante obtuvo un dictamen idóneo, la Comisión de Vinculación lo hará del conocimiento de las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para que en un término de dos días hábiles emitan las observaciones a que haya lugar en los términos precitados.

Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

Concluido el plazo de observaciones de las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, la Comisión de Vinculación hará del conocimiento público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, la relación de quienes, al no tener algún impedimento legal y habiendo aprobado las etapas anteriores, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista, conforme al calendario que apruebe la Comisión de Vinculación para tal efecto.

5. Valoración curricular y entrevista. Para los efectos de esta Convocatoria, la valoración curricular y la entrevista serán consideradas una misma etapa.

Las y los aspirantes cuyo ensayo resulte idóneo y se considere que no existen elementos objetivos aportados por las y los representantes de los partidos políticos o por Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para descalificarlos como aspirantes, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista.

El Consejo General, a propuesta de la Comisión de Vinculación, aprobará los criterios para realizar la valoración curricular y la entrevista, los que deberán considerar al menos lo siguiente:

- a) Propósito;
- b) Responsables de conducir las entrevistas;
- c) Procedimiento para la calificación;
- d) Las competencias a valorar;
- e) Ponderación que se utilizará para la calificación;
- f) Instrumento que se utilizará para la calificación.

Los criterios que apruebe el Consejo General serán notificados a las y los aspirantes a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Esta etapa estará a cargo de las y los Consejeros Electorales del Instituto, los cuales conformarán grupos de entrevistadores.

Al efecto, se procurará un equilibrio entre géneros en la conformación de las listas de las y los aspirantes que accedan a dicha etapa, para lo cual, la Comisión de Vinculación integrará las listas diferenciadas de hombres y mujeres cuyo ensayo presencial haya sido dictaminado como idóneo.

Las entrevistas se realizarán conforme al calendario y sedes que previamente apruebe la Comisión de Vinculación. La información sobre el calendario y la sede se publicará en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. Asimismo, se notificará a las y los aspirantes al correo electrónico proporcionado por los mismos, debiendo acusar de recibida dicha actuación. De la misma forma, se publicará en los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en el estado de Veracruz.

Las entrevistas serán transmitidas en tiempo real en el portal del Instituto www.ine.mx, serán grabadas en video y estarán disponibles en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral.

En la etapa de valoración curricular y entrevista se identificará que el perfil de las y los aspirantes se apegue a los principios rectores de la función electoral y cuente con las competencias indispensables para determinar la idoneidad de las y los aspirantes para el desempeño del cargo.

La entrevista será presencial, se realizará en panel con al menos tres Consejeros o Consejeras Electorales, y deberá atender al proceso siguiente:

- a) **Antes de la entrevista.** Las y los aspirantes deberán presentarse por lo menos 30 minutos previos a la hora de inicio de la entrevista.
- b) **Durante la entrevista.** Se conforma de tres etapas: apertura, desarrollo y cierre; tendrá una duración de hasta 20 minutos.
- c) **Después de la entrevista.** Al finalizar el proceso de entrevista, cada Consejera o Consejero Electoral deberá asentar el valor cuantificable de cada uno de los rubros que conforman la cédula de valoración curricular y entrevista.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Excepcionalmente, previa causa justificada, las entrevistas podrán llevarse a cabo de manera virtual mediante el uso de tecnologías de la información.

Las y los Consejeros Electorales del Consejo General podrán utilizar cualquier documento, insumo o herramienta que coadyuve a la realización de la entrevista.

En atención al principio de máxima publicidad, las cédulas de los aspirantes se harán públicas en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

OCTAVA. Integración de las listas de candidatas y candidatos

Conforme a lo previsto en los artículos 100, párrafos 1 y 3 y 101, párrafos 1, inciso f), 3 y 4 de la Ley General y 24, párrafo 1, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, la Comisión de Vinculación presentará al Consejo General una lista con la totalidad de los nombres de las y los candidatos a ocupar el cargo.

La propuesta de la o el candidato deberá contener un dictamen debidamente fundado y motivado, que incluya todas las etapas del proceso de selección, además de los elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad y capacidad para el cargo de la o el aspirante.

Una vez elaborada la propuesta de la o el candidato, respaldada con el dictamen respectivo, la Comisión de Vinculación deberá someterla a la consideración del Consejo General con una anticipación no menor a setenta y dos horas previas a la sesión que corresponda.

NOVENA. Designaciones

El Consejo General designará a más tardar el día **1 de noviembre de 2018**, por mayoría de ocho votos, a las Consejeras o Consejeros Electorales que iniciarán el encargo de siete años en el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, especificando, en su caso, el periodo o la conclusión del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, párrafo 1, incisos a), g) y jj), de la Ley General, y del Libro Segundo, Título Primero del

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

La fecha mencionada en el párrafo anterior será tomada como base para determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Base Tercera, párrafos 3 y 4 de la presente Convocatoria.

Con base en los artículos 24, párrafo 9, y 27 párrafo 4 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, en la designación de las o los Consejeros Electorales correspondientes, se procurará observar el principio de paridad de género considerando la integración del órgano superior de dirección del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

El Consejo General deberá ordenar la publicación del acuerdo de designación en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del estado de Veracruz, así como comunicar a las autoridades locales la designación. Asimismo, ordenará a la Secretaría Ejecutiva notificar el acuerdo respectivo a la o el ciudadano designado.

La ciudadana o el ciudadano que haya sido designado como Consejera o Consejero Electoral, deberá acreditar o manifestar bajo protesta de decir verdad, dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación del Acuerdo de designación, que no desempeña ningún empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos relacionados con actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia no remunerados.

La lista que contenga el nombre de las Consejeras o Consejeros Electorales designados será publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.

DÉCIMA. Nombramiento y toma de protesta

Las o los ciudadanos que hayan sido designados recibirán el nombramiento que lo acredita como Consejeras o Consejeros Electorales del Organismo Público Local Electoral de Veracruz; mismo que contendrá, entre otras cosas el nombre y apellidos, cargo, periodo y fecha de expedición.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados rendirán protesta en la fecha que determine el acuerdo de designación que apruebe el Consejo General. Se rendirá protesta en la sede del Organismo Público Local Electoral de Veracruz y deberá incluirse el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución Política del estado y las leyes que de ellas emanen, así como el apego a los principios rectores de la función electoral.

Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados no podrán ser reelectos, acorde a lo establecido en el artículo 116, base IV, inciso c), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DÉCIMA PRIMERA. Transparencia

El resultado de cada una de las etapas deberá hacerse público a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y por los demás medios que determine la Comisión de Vinculación, en los términos establecidos para cada etapa en la presente Convocatoria.

La información y documentación que integre los expedientes individuales de las y los aspirantes será confidencial en términos de lo establecido en el artículo 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que no podrá tener otro fin que el previsto en el proceso objeto de la presente Convocatoria, ni ser utilizada o difundida salvo que medie el consentimiento expreso del titular conforme al Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En atención al principio de máxima publicidad, el Instituto realizará la publicación de la información más relevante de cada aspirante, utilizando para este propósito la que se encuentra contenida en el resumen curricular, entregada por cada aspirante al momento de su registro.

DÉCIMA SEGUNDA. Casos no previstos

Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la Comisión de Vinculación, con base en lo dispuesto en el Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

**Modificación en acatamiento de las sentencias
recaídas en los expedientes SUP-RAP-216/2018 y
SUP-JDC-421/2018**

Para mayores informes favor de comunicarse a los teléfonos:

Junta Local Ejecutiva (01-228) 841-64-90 / (01-228) 841-64-99		
Junta Distrital 01	(01-846) 266-18-28 / (01-846) 266-31-28	Junta Distrital 02 (01-789) 893-10-79 / (01-789) 893-01-80
Junta Distrital 03	(01-783) 834-74-11 / (01-783) 834-74-12	Junta Distrital 04 (01-229) 972-26-50 / (01-229) 972-26-43
Junta Distrital 05	(01-782) 822-48-57 / (01-782) 822-54-06	Junta Distrital 06 (01-784) 842-43-25 / (01-784) 842-30-73
Junta Distrital 07	(01-232) 324-37-72 / (01-232) 324-79-97	Junta Distrital 08 (01-228) 811-71-43 / (01-228) 811-71-44
Junta Distrital 09	(01-228) 816-34-55 / (01-228) 816-20-45	Junta Distrital 10 (01-228) 841-48-11 / (01-228) 812-47-31
Junta Distrital 11	(01-921) 214-91-74 / (01-921) 215-01-75	Junta Distrital 12 (01-229) 939-40-75 / (01-229) 934-77-63
Junta Distrital 13	(01-273) 734-02-59 / (01-273) 734-34-71	Junta Distrital 14 (01-922) 223-43-64 / (01-922) 223-43-72
Junta Distrital 15	(01-272) 725-76-86 / (01-272) 725-76-46	Junta Distrital 16 (01-271) 718-02-67 / (01-271) 718-01-48
Junta Distrital 17	(01-288) 882-32-00 / (01-288) 882-33-11	Junta Distrital 18 (01-278) 732-60-98 / (01-278) 732-60-97
Junta Distrital 19	(01-294) 942-24-44 / (01-294) 942-13-17	Junta Distrital 20 (01-922) 264-00-29 / (01-922) 264-00-33

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo._____

Le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día._____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe Final del Marco de Actuación para la Continuidad de Operaciones del Proceso Electoral Federal 2018._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo._____

Integrantes del Consejo General está a su consideración este Informe._____

Tiene el uso de la palabra el Secretario del Consejo._____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Muchas gracias, Consejero Presidente._____

Desde hace al menos 2 años y ante el evidente reto que representaba la organización del Proceso Electoral 2017-2018, el Instituto Nacional Electoral empezó a trabajar en la identificación de posibles contingencias que pudieran obstaculizar el adecuado desarrollo de las funciones electorales, la experiencia internacional en Procesos Electorales que se vieron afectados por el fenómeno de las noticias falsas o el intento de vulnerar los Sistemas informáticos asociados a las elecciones, así como la propia realidad nacional que se antojaba de altísima complejidad, pintaban un panorama que no se podía soslayar._____

A lo largo de la historia del Instituto Federal Electoral y lo que lleva el Instituto Nacional Electoral, hemos aprendido que en la organización de los Procesos Electorales siempre se presentan en mayor o menor medida, situaciones ajenas y fuera de control de esta institución, estas eventualidades algunas de ellas difícilmente previsibles, van desde desastres naturales hasta movimientos sociales que pueden afectar los objetivos de las tareas asociadas a la organización de Elecciones._____

Para hacerles frente a las diversas contingencias, esta autoridad ha implementado medidas diversas, la experiencia más emblemática y más cercana que podemos

recordar fue durante 2015 cuando este Consejo General tuvo que tomar acciones emergentes para la celebración de sesiones de las Juntas Distritales en sedes alternas para la integración de mesas directivas y la instalación de las casillas el día de la Jornada Electoral, de la misma manera hemos enfrentado eventos desafortunados como la presencia del Huracán Blanca en Baja California en las Elecciones del año 2015, por estos eventos que pudieran afectar los objetivos del Proceso Electoral y en los que el Instituto no puede determinar y predecir cabalmente su ocurrencia, hemos venido realizando esfuerzos por conocer, entender e implementar las mejores prácticas en materia de administración de riesgos. _____

En materia administrativa contamos con avances en la implementación del Control Interno pasado en Modelos y estándares internacionalmente reconocidos, además de que interactuamos con especialistas en la identificación y mitigación de riesgos para que apoyaran con su experiencia y conocimientos en la continuidad de operaciones de esta institución, con la identificación de elementos generalmente reconocidos como buenas prácticas, este Consejo General determinó que para el Proceso Electoral 2017-2018, nos hiciéramos cargo de la administración de riesgos y de la continuidad de operaciones desde el propio Instituto, otorgándonos a la estructura ejecutiva de operación, elementos esenciales de funcionamiento a definir el alcance objetivo y fines de esta delicada tarea. _____

Basados en las experiencias adquiridas, la instrucción del Consejo General y las referencias metodológicas internacionales, construimos el marco de actuación para la continuidad de operaciones como un elemento subyacente a la planeación institucional. _____

El marco de actuación buscó tener un procedimiento estructurado para posibilitar a la institución reaccionar de manera inmediata ante la materialización de algún tipo de riesgo, con el fin de reencausarlo al desarrollo normal del Proceso Electoral. _____

Una vez concebido el marco de actuación para la continuidad de operaciones, las áreas del Instituto identificaron los riesgos relacionados con el Proceso Electoral,

evaluándonos mediante una matriz de acuerdo con su posible impacto y su probabilidad de ocurrencia. _____

Es importante señalar que la identificación de riesgos con su probabilidad e impacto por sí misma, no representa una señal de peligro o alerta para el Proceso Electoral, sino la oportunidad para atender, corregir o prevenir algún eventual problema. _____

Así identificamos cerca de 2 mil posibles eventos vinculados a actividades del Proceso Electoral, la mayoría de los cuales fueron registrados respecto de las actividades relacionadas con la ubicación, instalación y funcionamiento de casillas, el 14 por ciento; la capacitación electoral el 13.7 por ciento y la credencialización y Lista Nominal, el 11.8 por ciento. _____

De igual manera, para actividades de soporte, es decir, labores que se realizan durante todo el Proceso Electoral y en todas sus etapas, como por ejemplo, las labores administrativas de atención jurídica y, principalmente, de protección civil y desastres naturales, fueron identificadas diversas áreas de oportunidad, inclusive en este momento se encuentran vigentes 18 posibles eventos, pero como se explica en el Informe, su materialización no afectaría los objetivos del proceso, estos ya fueron cumplidos a cabalidad, lo que nos permite concluir la operación del marco de actuación con la presentación de este Informe. _____

No obstante que el registro de eventos tuvo una copiosa participación, principalmente por parte de las Juntas Locales y Distritales, la materialización de riesgos ocurrió únicamente en 32 casos. _____

Ahora bien, el marco de actuación nos permitió estar preparados para cualquier complejidad como las que ocurrieron durante 2015. La preparación y el trabajo implicado para ello, fue arduo, su administración exigió la inversión de horas persona para su operación, especialmente en momentos en que estábamos dedicados a los trabajos sustantivos del Proceso Electoral. _____

Sin embargo, es indudable que se trató de un esfuerzo exitoso para prevenir la afectación de alguno de los objetivos del Proceso Electoral. _____

Señoras y señores Consejeros Electorales, el funcionamiento del marco de actuación concluye el día de hoy y nos entregó los resultados esperados, permitió al Instituto estar preparado para enfrentar cualquier eventualidad. Los resultados están a la vista. _____

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, Secretario del Consejo. _____

¿Alguna otra intervención en este Informe? _____

De no ser así, por favor, sírvanse a continuar con el siguiente asunto del orden del día. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Cuarto Informe que presenta el Secretario Ejecutivo al Consejo General del Instituto Nacional Electoral con el propósito de difundir, en atención al principio de definitividad que rige los Procesos Electorales, la realización y conclusión de las etapas, actos y actividades trascendentes de los órganos electorales del Instituto. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Le pido que presente el Informe que nos ocupa. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, Consejero Presidente. _____

En cumplimiento al artículo 431 del Reglamento de Elecciones, cuyo propósito es atender el principio de definitividad que rige los Procesos Electorales y, por lo tanto, difundir la realización y conclusión de los actos y actividades trascendentes de este órgano electoral, esta Secretaría Ejecutiva pone a su consideración el Cuarto y último Informe de Definitividad en torno al Proceso Electoral 2017-2018, que considera el periodo que va del 2 de julio al 31 de agosto del presente año. _____

Como saben, el Proceso Electoral que recién ha concluido se conformó por 4 etapas: la primera, Preparación de la Elección; la segunda, Jornada Electoral; la tercera,

Resultados y declaración de validez de las elecciones; y finalmente, la cuarta, Dictamen y Declaración de Validez de la Elección y de Presidente electo. _____

En este Informe, damos cuenta de la tercera etapa, Resultados y declaración de validez de las elecciones, y de manera general se hace referencia a la cuarta etapa a cargo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. _____

Hace apenas unas semanas concluyó el Proceso Electoral Federal, una vez que la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió el último de los medios de impugnación vinculado con los cargos de Elección Federales. Si bien es cierto que aún hay medios de impugnación pendientes de resolver, estos tienen implicaciones únicamente para la definitividad de las Elecciones Locales, así, han concluido meses de intenso esfuerzo y trabajo de esta institución en todo el territorio nacional. _____

Los funcionarios electorales desplegaron con toda eficacia y eficiencia y profesionalismo su conocimiento y experiencia para la organización de la elección. ____

Una vez más, y dando continuidad al pasado Informe, esta Cuarta y última entrega rinde buenas cuentas. El esfuerzo conjunto permitió que tal y como se había comprometido, el Instituto Nacional Electoral a través del Consejero Presidente, que informara la noche del día de la elección las estimaciones del Conteo Rápido para la Elección Presidencial. _____

Asimismo, el Programa de Resultados Electorales Preliminares, permitió la consulta de los resultados asentados en las Actas de Escrutinio y Cómputo de las 3 Elecciones. Los resultados electorales fueron consolidados durante las sesiones públicas de Cómputos Distritales y de entidad federativa, en donde se recontaron en promedio 76 por ciento de los paquetes electorales; lo anterior permitió que el domingo siguiente al de la Jornada Electoral se informara a este órgano colegiado y a la sociedad en general la sumatoria de los resultados asentados en las actas, y conocer así los resultados por partido político y candidaturas para la Elección Presidencial, y por partido político para las elecciones de Senadurías y Diputaciones. _____

Adicionalmente a la realización de los Cómputos, y luego de que las Salas del Tribunal Electoral resolvieron los medios de impugnación en contra de los resultados de las distintas elecciones, este Consejo General llevó a cabo la asignación de Diputaciones y Senadurías de Representación Proporcional._____

Con esta importante determinación, el Instituto Nacional Electoral concluyó la tercera etapa del proceso._____

Como es derecho de las y los candidatos y partidos políticos, a lo largo de todo el Proceso Electoral, estos participaron en la deliberación para la toma de decisiones, y ejercieron su derecho de impugnarlas en todos sus extremos, de ahí que se hayan presentado más de 3 mil medios de impugnación en contra de diversos Acuerdos, actos o Resoluciones de esta autoridad electoral y que fueron tramitados en oficinas centrales o a través de órganos desconcentrados._____

Además, se presentaron los Dictámenes Consolidados de los gastos de los partidos políticos durante Precampañas y campañas, que implicaron la revisión de más de 30 mil Informes de ingresos y egresos._____

En resumen, toda decisión que configuró el Proceso Electoral 2017-2018 fue discutida y revisada por los partidos políticos en todos los circuitos de deliberación institucional a donde acuden por derecho propio, su participación fue clave para la construcción de cada eslabón o decisión electoral._____

En este órgano colegiado los partidos políticos pudieron discutir, corregir y proponer medidas adicionales a cada una de las decisiones del Instituto Nacional Electoral, cuando hubo disenso ejercieron su derecho a impugnar y controvertir, el Tribunal Electoral actuó en cada caso y resolvió, el Instituto Nacional Electoral acató, una vez resuelto cada asunto se volvió definitivo e inatacable, gracias a este diseño legal que concibe la definitividad como principio rector, el Proceso Electoral 2017-2018, resultó jurídicamente válido._____

Cabe destacar la importancia de la cuarta y última etapa del Proceso Electoral Federal, si bien se trata de una atribución de la Sala Superior del Tribunal Electoral, también es

cierto que, al realizar el Cómputo Final y la calificación de la Elección Presidencial, la última instancia en materia electoral determinó como válido el Proceso Electoral en su conjunto, y con ello la elección organizada por el Instituto Nacional Electoral. _____

Señoras y señores Consejeros y representantes, los actos que se reportaron en los 4 Informes de definitividad aquí presentados, documentan todas aquellas acciones y decisiones relevantes que conformaron el desarrollo del Proceso Electoral más grande que una autoridad haya organizado en México. _____

La información que se ha reportado a lo largo de estos meses demuestra que se trató de un Proceso Electoral ampliamente vigilado y transparente, se contó con representantes de al menos un partido político en 99.23 por ciento del total de las casillas instaladas, y hubo presencia de observadores electorales en 17 mil 300 de ellas, se recontaron en sesión pública 76 por ciento de los paquetes electorales, se dieron a conocer las estimaciones de los conteos rápidos la misma noche de la elección y el Sistema de Resultados Preliminares ofreció información ininterrumpida, comprobable, accesible para cualquier persona a lo largo de 24 horas. _____

Por solo mencionar los aspectos más evidentes de la máxima publicidad que rigió el Proceso Electoral. _____

Finalmente, quiero aprovechar la ocasión para agradecer a todas y todos los ciudadanos que desde su trinchera participaron en este Proceso Electoral y, sobre todo, a los miles de funcionarios electorales, aquí en oficinas centrales y en los 332 órganos desconcentrados que hicieron posible que, una vez más, esta institución entregara buenas cuentas a la sociedad mexicana garantizando la transición democrática, pacífica y periódica del poder. _____

Especial mención es el acompañamiento de las Consejeras y los Consejeros Electorales en las diversas Comisiones, particularmente Comisiones Unidas, por el acompañamiento en la organización de la elección. _____

Es cuanto, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario del Consejo. _____

Al no haber más intervenciones. _____

Damos por recibido este Informe y le pido al Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente asunto del orden del día. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se designa como ganadora en el cargo de Vocal Ejecutivo Distrital a la persona aspirante que forma parte de la Lista de Reserva de la primera Convocatoria del Concurso Público 2016-2017. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado. _____

Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, por favor, tome la votación correspondiente. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto 17. _____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. _____

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello; no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández), Consejero Presidente. _____

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG1304/2018) Ptos. 17 _____

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL POR EL QUE SE DESIGNA COMO GANADORA EN EL CARGO DE VOCAL EJECUTIVO DISTRITAL A LA PERSONA ASPIRANTE QUE FORMA PARTE DE LA LISTA DE RESERVA DE LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO 2016-2017

A N T E C E D E N T E S

- I. El 27 de enero de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Consejo General), emitió el Acuerdo INE/CG36/2016 por el que se aprueba la *Política de Igualdad de Género y No Discriminación del INE y las líneas estratégicas de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 2016-2023*, mismo que en el Lineamiento 1 determina “Promover la participación igualitaria y una mayor presencia de mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad en los ámbitos administrativos y del Servicio Profesional Electoral Nacional.”
- II. La Junta General Ejecutiva (Junta), en sesión extraordinaria celebrada el 1 de septiembre de 2016, mediante Acuerdo INE/JGE207/2016, aprobó someter la propuesta de los Lineamientos del Concurso Público 2016-2017 de ingreso para ocupar plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos del Concurso), a consideración del Consejo General para los efectos establecidos en el artículo 153 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto).
- III. El 7 de septiembre de 2016, a propuesta de la Junta, el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG659/2016, por el que se aprobaron los Lineamientos del Concurso.
- IV. El 12 de septiembre de 2016, el partido político MORENA interpuso un recurso de apelación en contra del Acuerdo INE/CG659/2016, que fue radicado el 15 de septiembre siguiente en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo el expediente SUP-RAP-459/2016.

- V.** El mencionado recurso de apelación se resolvió mediante sentencia del 5 de octubre de 2016, en el sentido de revocar el Acuerdo impugnado, ordenando al Instituto Nacional Electoral (Instituto) emitir un nuevo acuerdo en el que se contemplaran los cargos y puestos de la estructura ejecutiva y técnica de las Unidades Técnicas de Fiscalización, Contencioso Electoral y Vinculación con Organismos Públicos Locales Electorales, y técnica de las Direcciones Ejecutivas en Oficinas Centrales para los efectos de la celebración de concursos públicos para el ingreso al servicio y ocupación de plazas. Asimismo, dejó sin efectos el Considerando Segundo transitorio de los Lineamientos del Concurso.
- VI.** En acatamiento a dicha resolución, el 19 de octubre de 2016, la Junta aprobó el Acuerdo INE/JGE248/2016, por el que ordenó a las y los Titulares de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas de este Instituto realizar un análisis integral de la estructura orgánica y funcional de dichas áreas del Instituto y, en su caso, la consecuente propuesta de modificación organizacional.
- VII.** El 24 de octubre de 2016, el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG757/2016 por el que se aprobaron los Lineamientos del Concurso Público 2016-2017 de ingreso para ocupar plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el Recurso de Apelación SUP-RAP-459/2016.
- VIII.** El 10 de noviembre de 2016, la Junta aprobó mediante Acuerdo INE/JGE272/2016 la Declaratoria de vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional que serían concursadas en la Primera Convocatoria del Concurso Público 2016-2017 para ocupar cargos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema INE.
- IX.** La Junta, en sesión celebrada el 10 de noviembre de 2016, mediante el Acuerdo INE/JGE273/2016, aprobó la emisión de la Primera Convocatoria del Concurso Público 2016-2017 de ingreso para ocupar plazas en cargos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral.
- X.** El 5 de abril de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG105/2017 por el que se aprobó designar como Vocales Ejecutivos de Junta Local Ejecutiva o Junta Distrital Ejecutiva a las personas aspirantes que resultaron

ganadoras en la Primera Convocatoria del Concurso Público 2016-2017 para ocupar cargos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto.

- XI.** El 21 de agosto de 2017, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), publicó en la página de Internet del Instituto, las Listas de Reserva de la Primera y Segunda Convocatorias del Concurso Público 2016-2017.
- XII.** Los días 28 de agosto, 30 de octubre, 22 de noviembre, todos de 2017, así como el 28 de febrero y el 23 de marzo, ambos de 2018, el Consejo General aprobó los Acuerdos INE/CG380/2017, INE/CG487/2017, INE/CG560/2017, INE/CG114/2018 e INE/CG265/2018, respectivamente, mediante los cuales se designan como ganadoras para ocupar vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional en el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva a las personas aspirantes que forman parte de la Lista de Reserva de la Primera Convocatoria del Concurso Público 2016-2017.

CONSIDERANDOS

Primero. Competencia.

Este Consejo General es competente para aprobar el Proyecto de Acuerdo por el que se designa como ganadora para ocupar una plaza vacante del Servicio Profesional Electoral Nacional en el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva, a la persona aspirante que forma parte de la Lista de Reserva de la Primera Convocatoria del Concurso Público 2016-2017, de conformidad con el artículo 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 34, numeral 1, inciso a); 35, numeral 1; 36, numeral 1 y 44, numeral 1, inciso b) y jj), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); 8, numeral 1 y VIII y 140, primer párrafo del Estatuto; 84, segundo párrafo de Lineamientos del Concurso Público 2016-2017; 5, 7 de los Lineamientos para la designación de Presidentes de Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral.

Segundo. Disposiciones normativas que sustentan la determinación.

1. En materia de Protección de Derechos Humanos y No Discriminación, son aplicables, los artículos 1º, párrafos primero, tercero y quinto de la CPEUM; 1, 2 y 5 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), y 134 del Estatuto.
2. En materia del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) del Sistema del Instituto, resultan aplicables los artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafo primero y Apartado D de la CPEUM; en relación con los artículos 29, numeral 1; 30, numerales 2 y 3; 202, numerales 1, 2 y 6; 203, numeral 1, inciso c) de la LGIPE, así como con los artículos 1, fracciones I y II; 17; 18; 20, fracción I; 21; 29, fracciones I y II; 122; 132; 133, fracción I; 135; 136; 139; 142 del Estatuto.
3. En materia del Concurso Público -como vía de ingreso al SPEN-, son aplicables los artículos 144; 148; 152; 153; 154; 155; 156; 158; 159; 160; del Estatuto, así como los artículos 3; 22; de los Lineamientos del Concurso.
4. En lo que se refiere a la integración y utilización de la Lista de Reserva son aplicables los artículos 161 del Estatuto; 82, 83 y 84 de los Lineamientos del Concurso.
5. Corresponde a la DESPEN, cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos del Servicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57, numeral 1, incisos b) y d) de la LGIPE; en relación con los artículos 13, fracciones I, II, V y IX; 150; 151 del Estatuto.
6. Por su parte, la intervención de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional (Comisión del Servicio), encuentra base legal en lo que disponen los artículos 10, fracciones I y IX; 147; 157 del Estatuto.
7. De conformidad con lo previsto en el artículo 12, fracciones III y IV del Estatuto, corresponde al Secretario Ejecutivo expedir los nombramientos del personal del Servicio del Sistema del Instituto Nacional Electoral.

Tercero. Exposición de motivos que sustentan la determinación.

- I. Conforme a las disposiciones establecidas en el Estatuto, Lineamientos del Concurso y en la Primera Convocatoria del Concurso, la DESPEN ejecutó las acciones necesarias llevar a cabo las distintas fases y etapas de las referidas Convocatorias, culminando con la designación de las personas ganadoras para ocupar las plazas incluidas en las declaratorias de vacantes correspondientes, en el acuerdo referido en el antecedente X.
- II. Una vez designadas las personas ganadoras de la Primera Convocatoria, la DESPEN integró la Lista de Reserva con las personas aspirantes que no fueron objeto de asignación de alguna de las plazas publicadas en la referida Convocatoria, pero que aprobaron las siguientes etapas:
 - a) examen de conocimientos generales y técnico electorales;
 - b) cotejo y verificación de información de las personas aspirantes que aprobaron el examen de conocimientos generales y técnico-electorales;
 - c) evaluación psicométrica, y
 - d) entrevistas.
- III. En consecuencia, la DESPEN publicó la Lista de Reserva de la Primera Convocatoria, conforme al antecedente XI del presente Acuerdo.

Dicha lista con fundamento en lo establecido en el artículo 82, segundo párrafo de los Lineamientos del Concurso, tendrá una vigencia de un año a partir de su publicación.
- IV. En apego a la medida especial de carácter temporal en materia de género, la referida Lista de Reserva está encabezada por la mujer que obtuvo la mayor calificación y es sucedida por hombres y mujeres de manera individual intercalada, en orden de mayor a menor calificación.
- V. Una vez que la Lista de Reserva quedó integrada con las plazas vacantes incluidas en la Primera Convocatoria, la DESPEN llevó a cabo las acciones necesarias para ofrecer las plazas vacantes a las personas que integran dicha lista, en el plazo a que se refiere el artículo 83 de los Lineamientos del Concurso y atendiendo el siguiente procedimiento:

- a) La DESPEN ofrece, en estricto orden de prelación, cada vacante a la persona aspirante integrante de la Lista de Reserva.
- b) La persona aspirante debe expresar por escrito, su aceptación o declinación al ofrecimiento, en un plazo no mayor a dos días hábiles a partir de que le fuera comunicada dicha oferta.
- c) En los casos que no se recibe respuesta por escrito en el plazo establecido, se tiene por declinada su asignación, por lo que se convoca a la siguiente persona aspirante de la Lista de Reserva; y se repite el procedimiento, hasta contar con una aceptación de la plaza ofrecida, o bien, concluir los ofrecimientos con las personas que integran la citada lista.

VI. El 7 de julio de 2018, mediante oficio INE/SLP/JLE/VE/0665/2018, suscrito por la Lic. Ana Lilia Pérez Mendoza, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de San Luis Potosí, remitió a la DESPEN el escrito de solicitud del Lic. Sergio Humberto Muñoz Pérez, Vocal Ejecutivo de la 06 Junta Distrital Ejecutiva del estado de San Luis Potosí para el goce de licencia pre jubilatoria, durante el periodo del 4 de julio al 17 de agosto del presente año, así como la renuncia de dicho funcionario, la cual surtió efectos a partir del 18 de agosto de 2018.

De lo anterior, es importante precisar que una vez vacante la plaza de Vocal Ejecutivo de la 06 Junta Distrital Ejecutiva del estado de San Luis Potosí, la DESPEN llevó a cabo el procedimiento de ofrecimiento para ocupar el cargo mencionado, a la persona que continúa en el orden de prelación de la lista de reserva, para lo cual el 20 de agosto de 2018 –siendo aún vigente la Lista de Reserva-, se envió correo electrónico ofreciendo la plaza vacante y se recibió el formato de aceptación correspondiente al día siguiente.

VII. De esta forma, para la designación de la persona ganadora, la DESPEN aplicó el procedimiento de utilización de la Lista de Reserva para cubrir la vacante generada, tal y como lo refiere el **Anexo 1**.

VIII. En sesión celebrada el 29 de agosto de 2018, la Comisión del Servicio conoció el contenido y efectos del presente Acuerdo y no habiendo hecho ninguna observación, autorizó presentarlo al Consejo General para que, dicho Órgano Colegiado, determine sobre su aprobación.

- IX.** Con motivo de lo anterior, este Consejo General estima que se ha cumplido con los extremos legales y estatutarios correspondientes para proceder a la aprobación de la designación como ganadora para ocupar la vacante en el cargo de Vocal Ejecutivo Distrital del Servicio, a la persona aspirante que forma parte de la Lista de Reserva de la Primera Convocatoria del Concurso Público 2016-2017.

En razón de los antecedentes y consideraciones expresadas, este Consejo General en ejercicio de sus facultades, emite el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se designa como ganador mediante la utilización de la Lista de Reserva de la Primera Convocatoria del Concurso Público 2016-2017 para ocupar la vacante en el cargo de Vocal Ejecutivo Distrital del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, a la siguiente persona:

San Luis Potosí

Núm.	Nombre	Cargo/puesto	Adscripción	Cabecera
1	Jesús Alberto Robledo Valero	Vocal Ejecutivo Distrital	Distrito 06	San Luis Potosí

Segundo. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, notifique a la persona ganadora de la Lista de Reserva de la Primera Convocatoria del Concurso Público 2016-2017, referida en el Punto Primero del presente Acuerdo, para que, a partir del 16 de septiembre de 2018, asuma las funciones inherentes al cargo objeto de designación.

Tercero. Se instruye al Secretario Ejecutivo a expedir el nombramiento y oficio de adscripción que corresponda en los términos de las disposiciones legales aplicables.

Cuarto. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración a realizar las acciones de orden administrativo que resulten necesarias a efecto de dar cumplimiento al presente Acuerdo.

Quinto. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto Nacional Electoral.

Designación de una plaza vacante correspondiente a la lista de reserva de la Primera Convocatoria del Concurso Público 2016-2017

ANEXO 1

PLAZA VACANTE OFRECIDA A LOS ASPIRANTES QUE INTEGRAN LA
LISTA DE RESERVA DE LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL
CONCURSO PÚBLICO 2016-2017 PARA OCUPAR EL CARGO DE VOCAL EJECUTIVO DE JUNTA
DISTRITAL DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

NÚM.	ENTIDAD	CARGO/PUESTO	ADSCRIPCIÓN	CABECERA	OBSERVACIONES
1	San Luis Potosí	Vocal Ejecutivo de Junta Distrital	06	San Luis Potosí	PLAZA OFRECIDA Y ACEPTADA

Lista de reserva del Concurso Público 2016-2017

Vocal Ejecutivo / Ejecutiva
Junta Distrital Ejecutiva

Nº.	FOLIO	TIPO DE ASPIRANTE	NOMBRE	ENTIDAD DE REGISTRO DE LA PERSONA ASPIRANTE	SEXO	CALIFICACION DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS GENERALES Y TECNICOS ELECTORALES (80%)	CALIFICACION DE LA EVALUACION PSICOMETRICA POR COMPETENCIAS (10%)	CALIFICACION DE ENTREVISTAS (30%)	CALIFICACION FINAL	OBSERVACIONES
1	F11600010101201897	MSPEN - INE	MIRANDA CASTRO SANDRA	MEXICO	MUJER	8.36	9.26	9.68	8.84	GANADORA MEDIANTE LISTA DE RESERVA (04-ACAPULCO, GUERRERO)
2	F11600010101200321	MSPEN - INE	SANCHEZ GOMEZ IRAM YOVAN	CHIAPAS	HOMBRE	8.80	9.37	9.44	9.04	GANADOR MEDIANTE LISTA DE RESERVA (03-OCOSINGO, CHIAPAS)
3	F11600010101203244	MSPEN - INE	TZONTECOMANI MENDEIETA ALICIA	GUANAJUATO	MUJER	8.45	9.25	9.44	8.82	DECLINACIÓN De conformidad con lo establecido en el artículo 79º en los Lineamientos del Concurso Público 2016-2017 de Ingreso para ocupar Plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral Nacional Queda fuera del concurso, debido a que se le ha ofrecido dos veces este cargo.
4	F11600010101200362	MSPEN - INE	HERNANDEZ MARCIAL EDGAR ALLAN	PUEBLA	HOMBRE	8.42	9.19	9.78	8.90	GANADOR MEDIANTE LISTA DE RESERVA (02-JEREZ DE GARCIA SALINAS, ZACATECAS)
5	F11600010101200019	MSPEN - INE	AMEZQUITA PAVIA KAREN MARISOL	YUCATAN	MUJER	8.24	9.30	9.60	8.75	DECLINACIÓN De conformidad con lo establecido en el artículo 79º en los Lineamientos del Concurso Público 2016-2017 de Ingreso para ocupar Plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral Nacional Queda fuera del concurso, debido a que se le ha ofrecido dos veces este cargo.

LISTA DE RESERVA DE LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PUBLICO 2016-2017
CARGO: VOCAL EJECUTIVA / EJECUTIVO DE JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA



Nº.	FOLO	TPO DE ASPIRANTE	NOMBRE	ENTIDAD DE REGISTRO DE LA PERSONA ASPIRANTE	SEXO	CALIFICACION DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS GENERALES Y TECNICO ELECTORALES (60%)	CALIFICACION DE LA EVALUACION PSICOMETRICA POR COMPETENCIAS (10%)	CALIFICACION DE ENTREVISTAS (30%)	CALIFICACION FINAL	OBSERVACIONES
6	F11600010101203592	MSPEN - INE	BECERRA TEJEDA FAUSTINO	VERACRUZ	HOMBRE	8.67	7.85	9.28	8.77	DECLINACIÓN De conformidad con lo establecido en el artículo 79º en los Lineamientos del Concurso Público 2016-2017 de ingreso para ocupar Plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral Nacional Queda fuera del concurso, debido a que se le ha ofrecido dos veces este cargo.
7	F11600010101203873	MSPEN - INE	QUIZ DE LEON ZAPATA LILIANA	HIDALGO	MULIER	8.18	9.33	9.70	8.75	DECLINACIÓN De conformidad con lo establecido en el artículo 79º en los Lineamientos del Concurso Público 2016-2017 de ingreso para ocupar Plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral Nacional Queda fuera del concurso, debido a que se le ha ofrecido dos veces este cargo.
8	F11600010101203415	MSPEN - INE	QUINTANAR GONZALEZ FELIPE BERNARDO	TLAXCALA	HOMBRE	8.53	9.11	9.34	8.83	GANADOR MEDIANTE LISTA DE RESERVA (05-CULIACÁN DE ROSALES, SINALOA)
9	F11600010101203016	MSPEN - INE	RAMIREZ REYES VERONICA	MICHOACAN	MULIER	8.40	8.62	9.34	8.70	DECLINACIÓN De conformidad con lo establecido en el artículo 79º en los Lineamientos del Concurso Público 2016-2017 de ingreso para ocupar Plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral Nacional Queda fuera del concurso, debido a que se le ha ofrecido dos veces este cargo.

VE_JDE

LISTA DE RESERVA DE LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PUBLICO 2016-2017
CARGO: VOCAL EJECUTIVA / EJECUTIVO DE JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA



Nº.	FOLIO	TIPO DE ASPIRANTE	NOMBRE	ENTIDAD DE REGISTRO DE LA PERSONA ASPIRANTE	SEXO	CALIFICACION DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS GENERALES Y TECNICOS ELECTORALES (60%)	CALIFICACION DE LA EVALUACION PSICOMETRICA POR COMPETENCIAS (10%)	CALIFICACION DE ENTREVISTAS (30%)	CALIFICACION FINAL	OBSERVACIONES
10	F11600010101200518	MSPEN - INE	PULIDO CASTRO JOSE VICENTE	TAMAULIPAS	HOMBRE	8.48	8.638	9.62	8.83	GANADOR MEDIANTE LISTA DE RESERVA (05- TULUANA, BAJA CALIFORNIA)
11	F11600010101201125	MSPEN - INE	GONZALEZ LABASTIDA CHRYSYTHIAN VERONICA	OAXACA	MUJER	8.20	8.68	9.46	8.62	DECLINACIÓN De conformidad con lo establecido en el artículo 79° en los Lineamientos del Concurso Público 2016-2017 de Ingreso para ocupar Plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral Queda fuera del concurso, debido a que se le ha ofrecido dos veces este cargo.
12	F11600010101203703	MSPEN - INE	PEREZ MELO EDGAR OMAR	JALISCO	HOMBRE	8.12	9.41	9.80	8.75	DECLINACIÓN De conformidad con lo establecido en el artículo 79° en los Lineamientos del Concurso Público 2016-2017 de Ingreso para ocupar Plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral Queda fuera del concurso, debido a que se le ha ofrecido dos veces este cargo.
13	F11600010101201090	MSPEN - INE	PEREZ PAREDES CELIA ELENA	CIUDAD DE MEXICO	MUJER	8.21	8.90	9.32	8.61	GANADORA MEDIANTE LISTA DE RESERVA (09- REYNOSA, TAMAULIPAS)
14	F11600010101201336	MSPEN - INE	LOPEZ MARTINEZ LEOPOLDO	JALISCO	HOMBRE	8.46	7.88	9.52	8.72	GANADOR MEDIANTE LISTA DE RESERVA (20- COSOLEACAQUE, VERACRUZ)

LISTA DE RESERVA DE LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PUBLICO 2016-2017

CARGO: VOCAL EJECUTIVA / EJECUTIVO DE JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA



No.	FOLIO	TIPO DE ASPIRANTE	NOMBRE	ENTIDAD DE REGISTRO DE LA PERSONA ASPIRANTE	SEXO	CALIFICACION DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS GENERALES Y TECNICOS ELECTORALES (60%)	CALIFICACION DE LA PSICOMETRIA POR COMPETENCIAS (10%)	CALIFICACION DE ENTREVISTAS (30%)	CALIFICACION FINAL	OBSERVACIONES
15	F1160001010203752	MSPEN - INE	GALEANA CARRASCO ADRIANA	VERACRUZ	MULIER	8.29	8.94	9.08	8.59	DECLINACIÓN De conformidad con lo establecido en el artículo 79° en los Lineamientos del Concurso Público 2016-2017 de ingreso para ocupar Plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral Queda fuera del concurso, debido a que se le ha ofrecido dos veces este cargo.
16	F1160001010201875	MSPEN - INE	CABALLERO CRUZ REYNEL ARMANDO	OAXACA	HOMBRE	8.20	8.94	9.56	8.68	GANADOR MEDIANTE LISTA DE RESERVA (04- TLACOLUILA DE MATAMOROS, OAXACA)
17	F1160001010202373	RA - INE	ESTRELLA ARIZPE CLAUDIA ELENA	BAJA CALIFORNIA SUR	MULIER	8.02	8.65	9.68	8.58	DECLINACIÓN De conformidad con lo establecido en el artículo 79° en los Lineamientos del Concurso Público 2016-2017 de ingreso para ocupar Plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral Queda fuera del concurso, debido a que se le ha ofrecido dos veces este cargo.
18	F1160001010200064	MSPEN - INE	PAZ GONZALEZ YUCUNDO	MICHOACAN	HOMBRE	8.45	8.515	9.18	8.67	GANADOR MEDIANTE LISTA DE RESERVA (02- JUÁREZ, CHIHUAHUA)
19	F1160001010202996	MSPEN - INE	BADILLO MUÑOZ ARACELI	JALISCO	MULIER	8.20	8.06	9.12	8.55	DECLINACIÓN De conformidad con lo establecido en el artículo 79° en los Lineamientos del Concurso Público 2016-2017 de ingreso para ocupar Plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral Queda fuera del concurso, debido a que se le ha ofrecido dos veces este cargo.

LISTA DE RESERVA DE LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PUBLICO 2016-2017

CARGO: VOCAL EJECUTIVA / EJECUTIVO DE JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA



No.	FOLO	TPO DE ASPIRANTE	NOMBRE	ENTIDAD DE REGISTRO DE LA PERSONA ASPIRANTE	SEXO	CALIFICACION DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS GENERALES Y TECNICO ELECTORALES (60%)	CALIFICACION DE LA EVALUACION PSICOMETRICA POR COMPETENCIAS (10%)	CALIFICACION DE ENTREVISTAS (30%)	CALIFICACION FINAL	OBSERVACIONES
20	F11600010101201285	MSPEN - INE	COVARRUBIAS ALBA OMAR NOE	TAMAULIPAS	HOMBRE	8.14	9.106	9.60	8.67	GANADOR MEDIANTE LISTA DE RESERVA (08- TULUANA, BAJA CALIFORNIA)
21	F11600010101205507	EXTERNO	BORQUEZ ESTRADA ZELANDIA	SAN LUIS POTOSI	MUJER	8.15	8.23	9.47	8.55	DECLINACIÓN De conformidad con lo establecido en el artículo 79° en los Lineamientos del Concurso Público 2016-2017 de Ingreso para ocupar Plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral Queda fuera del concurso, debido a que se le ha ofrecido dos veces este cargo.
22	F11600010101204182	MSPEN - INE	AGUILERA RAMIREZ ROGELIO DAVID	CIUDAD DE MEXICO	HOMBRE	8.27	8.85	9.40	8.66	DECLINACIÓN De conformidad con lo establecido en el artículo 79° en los Lineamientos del Concurso Público 2016-2017 de Ingreso para ocupar Plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral Queda fuera del concurso, debido a que se le ha ofrecido dos veces este cargo.
23	F11600010101203469	MSPEN - INE	DE PAREDES VENEGAS LUSSETTE	CIUDAD DE MEXICO	MUJER	8.17	9.307	9.00	8.53	GANADORA MEDIANTE LISTA DE RESERVA (03- TEPATTLÁN DE MORELOS, JALISCO)
24	F11600010101202566	MSPEN - INE	ESPINO MONZON JOSE ELADIO	SAN LUIS POTOSI	HOMBRE	8.05	9.203	9.69	8.65	GANADOR MEDIANTE LISTA DE RESERVA (04- H. MATAMOROS, TAMAULIPAS)

LISTA DE RESERVA DE LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PUBLICO 2016-2017
CARGO: VOCAL EJECUTIVA / EJECUTIVO DE JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA



No.	FOLIO	TIPO DE ASPIRANTE	NOMBRE	ENTIDAD DE REGISTRO DE LA PERSONA ASPIRANTE	SEXO	CALIFICACION DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS GENERALES Y TECNICO ELECTORALES (60%)	CALIFICACION DE LA EVALUACION PSICOMETRICA POR COMPETENCIAS (10%)	CALIFICACION DE ENTREVISTAS (30%)	CALIFICACION FINAL	OBSERVACIONES
25	F11600010101203866	MSPEN - INE	CRUZ GARCIA BLANCA YASSAHARA	PUEBLA	MUJER	7.92	8.43	9.60	8.47	DECLINACIÓN De conformidad con lo establecido en el artículo 79° en los Lineamientos del Concurso Público 2016-2017 de ingreso para ocupar Plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral Queda fuera del concurso, debido a que se le ha ofrecido dos veces este cargo.
26	F11600010101200767	RA - INE	HERNANDEZ RAMIREZ MILTON	CIUDAD DE MEXICO	HOMBRE	8.58	8.53	8.80	8.64	DECLINACIÓN De conformidad con lo establecido en el artículo 79° en los Lineamientos del Concurso Público 2016-2017 de ingreso para ocupar Plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral Queda fuera del concurso, debido a que se le ha ofrecido dos veces este cargo.
27	F11600010101203017	MSPEN - INE	ZACAULA CARDENAS EILEEN TERESITA	PUEBLA	MUJER	7.93	9.44	9.08	8.42	DECLINACIÓN De conformidad con lo establecido en el artículo 79° en los Lineamientos del Concurso Público 2016-2017 de ingreso para ocupar Plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral Queda fuera del concurso, debido a que se le ha ofrecido dos veces este cargo.
28	F11600010101200324	RA - INE	PALACIOS JIMENEZ OMAR MARIANO	CIUDAD DE MEXICO	HOMBRE	8.33	9.22	9.04	8.63	GANADOR (SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO)
29	F11600010101202532	MSPEN - INE	HERNANDEZ CRUZ MAYUMI ELIZABETH	CIUDAD DE MEXICO	MUJER	8.04	8.62	9.06	8.40	GANADORA MEDIANTE LISTA DE RESERVA (02-BOCHIL, CHIAPAS)

LISTA DE RESERVA DE LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PUBLICO 2016-2017

CARGO: VOCAL EJECUTIVA / EJECUTIVO DE JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA



No.	FOLIO	TIPO DE ASPIRANTE	NOMBRE	ENTIDAD DE REGISTRO DE LA PERSONA ASPIRANTE	SEXO	CALIFICACION DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS GENERALES Y TECNICO ELECTORALES (60%)	CALIFICACION DE LA EVALUACION PSICOMETRICA POR COMPETENCIAS (10%)	CALIFICACION DE ENTREVISTAS (30%)	CALIFICACION FINAL	OBSERVACIONES
30	F11600010101202608	MSPEN - INE	GONZALEZ REYES JUAN CARLOS	MICHOACAN	HOMBRE	8.14	9.113	9.42	8.62	GANADOR MEDIANTE LISTA DE RESERVA (09-REYNOSA, TAMAUJUPAS)
31	F11600010101204112	MSPEN - INE	BOTELLO VERZANEZ KAREN ANEL	MORELOS	MUJER	7.98	9.13	8.94	8.38	GANADORA MEDIANTE LISTA DE RESERVA (04-JOJUTLA, MORELOS)
32	F11600010101201338	MSPEN - INE	ROBLEDO VALERO JESUS ALBERTO	COAHUILA	HOMBRE	8.04	9.14	9.60	8.61	GANADOR MEDIANTE LISTA DE RESERVA (06-SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI)
33	F11600010101203049	RA - INE	ROMERO AGUILERA ESTEFANI	BAJA CALIFORNIA	MUJER	7.86	9.05	9.20	8.38	LISTA DE RESERVA
34	F11600010101204286	MSPEN - INE	MENDEZ SANTIAGO DAVID	QUINTANA ROO	HOMBRE	8.02	9.20	9.60	8.61	LISTA DE RESERVA
35	F11600010101203152	MSPEN - INE	HERNANDEZ MANCILLA NANCY JAZMIN	CIUDAD DE MEXICO	MUJER	8.14	8.39	8.80	8.36	LISTA DE RESERVA
36	F11600010101204957	EXTERNO	GONZALEZ RIVERA MANUEL	CIUDAD DE MEXICO	HOMBRE	8.37	7.59	9.44	8.61	LISTA DE RESERVA
37	F11600010101201238	MSPEN - INE	MORALES RADILLA YOLENY	CIUDAD DE MEXICO	MUJER	7.73	8.69	9.50	8.35	LISTA DE RESERVA
38	F11600010101202385	MSPEN - INE	CAMACHO IBARRA ALFREDO	SONORA	HOMBRE	8.17	8.56	9.48	8.60	LISTA DE RESERVA
39	F11600010101200990	MSPEN - INE	HERNANDEZ QUINTERO MARIBEL	PUEBLA	MUJER	7.76	9.40	9.14	8.33	LISTA DE RESERVA
40	F11600010101202379	MSPEN - INE	SANCHEZ GONZALEZ ROMAN	SONORA	HOMBRE	8.08	8.84	9.56	8.60	LISTA DE RESERVA
41	F11600010101201907	MSPEN - INE	CASTRO CRUZ RAQUEL	VERACRUZ	MUJER	7.72	8.38	9.50	8.32	LISTA DE RESERVA
42	F11600010101202300	EXTERNO	MOLINA EYSELE ADRIAN	CIUDAD DE MEXICO	HOMBRE	8.12	8.51	9.50	8.57	LISTA DE RESERVA
43	F11600010101204963	MSPEN - INE	FIGUEROA GAMEZ MADELEYNE IVETT	COAHUILA	MUJER	7.72	8.61	9.30	8.28	LISTA DE RESERVA
44	F11600010101201519	MSPEN - INE	MENDOZA MORTERA OCTAVIO	TABASCO	HOMBRE	8.30	7.44	9.28	8.50	LISTA DE RESERVA
45	F11600010101200111	MSPEN - INE	ESPINOZA HERNANDEZ MA. DE LA LUZ	CAMPECHE	MUJER	7.70	9.49	9.04	8.28	LISTA DE RESERVA
46	F11600010101204812	MSPEN - INE	MEDINA FLORES JOSE ANGEL	NUUEVO LEON	HOMBRE	8.24	8.48	9.00	8.49	LISTA DE RESERVA
47	F11600010101203207	MSPEN - INE	MARQUEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	PUEBLA	MUJER	7.68	9.06	9.20	8.27	LISTA DE RESERVA
48	F11600010101202774	MSPEN - INE	ROJAS GONZALEZ DANIEL	CIUDAD DE MEXICO	HOMBRE	8.49	8.45	8.28	8.42	LISTA DE RESERVA

LISTA DE RESERVA DE LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PUBLICO 2016-2017
CARGO: VOCAL EJECUTIVA / EJECUTIVO DE JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA



No.	FOLIO	TIPO DE ASPIRANTE	NOMBRE	ENTIDAD DE REGISTRO DE LA PERSONA ASPIRANTE	SEXO	CALIFICACION DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS GENERALES Y TECNICO ELECTORALES (60%)	CALIFICACION DE LA PSICOMETRICA POR COMPETENCIAS (10%)	CALIFICACION DE ENTREVISTAS (30%)	CALIFICACION FINAL	OBSERVACIONES
49	F1160001010201365	MSPEN - INE	SANTOS QUEVEDO PATRICIA	MEXICO	MUJER	7.67	9.33	9.14	8.27	LISTA DE RESERVA
50	F1160001010204306	MSPEN - INE	CONTRERAS MONTALVO SEFERINO ALEJANDRO	HIDALGO	HOMBRE	8.02	8.95	9.04	8.41	LISTA DE RESERVA
51	F1160001010202202	RA - INE	RAMIREZ LOPEZ CINTHYA JEANNETTE	JALISCO	MUJER	7.95	8.69	8.90	8.27	LISTA DE RESERVA
52	F1160001010200083	EXTERNO	PIMENTEL MACIAS CARLOS IGNACIO	CIUDAD DE MEXICO	HOMBRE	8.36	7.56	8.80	8.41	LISTA DE RESERVA
53	F1160001010201693	RA - INE	SALAZAR ALVARADO ARLETH	CIUDAD DE MEXICO	MUJER	8.39	9.23	7.62	8.24	LISTA DE RESERVA
54	F1160001010205993	MSPEN - INE	VILLALOBOS RANGEL CESAR ANDRES	TAMAULIPAS	HOMBRE	8.14	8.89	8.74	8.39	LISTA DE RESERVA
55	F1160001010205308	MSPEN - INE	FIGUEROA NAVARRO TERESA	SONORA	MUJER	7.92	7.92	8.90	8.21	LISTA DE RESERVA
56	F1160001010201666	MSPEN - INE	PURIEL MARTINEZ ANDRE AIME	VERACRUZ	HOMBRE	8.17	8.51	8.74	8.37	LISTA DE RESERVA
57	F1160001010204948	MSPEN - INE	PALE TEPETLA DELIA	VERACRUZ	MUJER	7.83	8.59	8.78	8.19	LISTA DE RESERVA
58	F1160001010205631	MSPEN - INE	GONZALEZ ROJAS DANIEL	MORELOS	HOMBRE	8.04	9.08	8.70	8.34	LISTA DE RESERVA
59	F1160001010200668	MSPEN - INE	URIBE PRADO JUDITH	JALISCO	MUJER	7.92	9.39	8.20	8.15	LISTA DE RESERVA
60	F1160001010200520	MSPEN - INE	LAGUNA RAMIREZ JOSUE	QUERETARO	HOMBRE	8.01	7.69	9.07	8.29	LISTA DE RESERVA
61	F1160001010204618	MSPEN - INE	SILVA PINA VERONICA	TAMAULIPAS	MUJER	7.69	7.82	9.14	8.13	LISTA DE RESERVA
62	F1160001010204909	MSPEN - INE	ALEJANDRE GALAZ OMAR ERNESTO	CIUDAD DE MEXICO	HOMBRE	8.22	7.84	8.10	8.14	LISTA DE RESERVA
63	F1160001010204356	MSPEN - INE	TAPIA ENRIQUEZ SILVESTRE IBETTE	OAXACA	MUJER	7.70	8.78	8.66	8.09	LISTA DE RESERVA
64	F1160001010202245	MSPEN - INE	DEL TORO GUZMAN JULIO CESAR	YUCATAN	HOMBRE	8.18	8.69	7.90	8.14	LISTA DE RESERVA
65	F1160001010201313	MSPEN - INE	GARCIA LOPEZ HUGO	CIUDAD DE MEXICO	HOMBRE	8.14	8.36	7.90	8.09	LISTA DE RESERVA

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Le pido que continúe con el siguiente asunto. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica la integración de diversas Comisiones, se ratifica la rotación de las Presidencias de las Comisiones Permanentes y otros órganos, así como se crean las Comisiones Temporales de seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019 y, de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de las modalidades de su voto. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado. _____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel. _____

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente. _____

El 8 de septiembre del año pasado, se creó la Comisión Temporal para la Igualdad de Género y No Discriminación, desde luego, como es una Comisión Temporal no se tiene previsto que exista una rotación por parte de sus integrantes y de quien preside. _____

Se consideró que tenía una vigencia de 2 años, sin embargo, se han acercado conmigo tanto el Consejero Electoral Benito Nacif como el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña para hacer un cambio en la integración de esta Comisión para pedirme que sea integrado el Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña en el lugar del Consejero Electoral Benito Nacif. _____

Es por ese motivo que quisiera solicitar que se integre, también la Comisión Temporal para la Igualdad de Género y No Discriminación únicamente para considerar este cambio en su integración. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel. _____

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jaime Castañeda, representante suplente de MORENA. _____

El C. representante suplente de MORENA, Licenciado Jaime Miguel Castañeda

Salas: Gracias, Consejero Presidente. _____

Muy buenas tardes a todos, intentaré ser breve. _____

Al parecer por lo que estoy observando hay una integración entre los miembros del Consejo General, en términos de inclusión de algunos Consejeros Electorales, sin embargo, no puedo dejar de pedir que se tenga por ratificada la objeción, la opinión que nosotros les señalábamos, sobre nuestras reservas en la integración de las Comisiones y estas épocas de austeridad algunas que quizás pudiesen desarrollar el trabajo en el seno de algunas ya creadas como puede ser la Comisión Temporal de Vinculación de los Mexicanos Residentes en el Extranjero. _____

También, lo que pasa es que de repente es difícil darle seguimiento a cómo van integrando Comisiones, no solo por lo que la Consejera Electoral Dania Paola Ravel acaba de mencionar en el movimiento de la integración, sino porque ayer mismo en la noche parece que la Comisión del Servicio Profesional Electoral, volvió a ser integrada o presidida por el Maestro Marco Antonio Baños. _____

Señalar que a nosotros nos sigue generando alguna reserva y lo tenemos que externar, la forma en la que la rotación de Comisiones se da, ya ustedes en su organización interna y en sus prácticas, que quizá sería bueno que estuviese regulada y más exteriorizada, lo han determinado, por lo pronto es una cuestión interna de los señores Consejeros Electorales, pero no por ello dejar de señalar estas cuestiones, que además, por si alguno quiere contestar a lo que yo he estado señalando, no hemos nosotros dejado de decir, nos parece que no es la forma más óptima de integrar las Comisiones al interior. _____

Pero, por lo que preveo, o por lo que se observa, que va a ser una votación unánime por parte de ustedes, solo señalar nuestra posición en ese sentido. _____

Muchas gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor representante. _____

Licenciado Jaime Castañeda, el Consejero Electoral Marco Antonio Baños desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?_____

El C. representante suplente de MORENA, Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas: Sí, claro._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Por favor, Consejero Electoral Marco Antonio Baños._____

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente, gracias señor representante._____

La pregunta que le formulo no sé si le entregaron a usted la versión final en la integración de Comisiones, no he sido propuesto para presidir la Comisión del Servicio Profesional, creo que ahí hay un error en algún documento que probablemente tenga usted, pero no, no es así, no pretendo darle golpe de Estado al Consejero Electoral Ciro Murayama, él va a ser el Presidente de la Comisión del Servicio Profesional Electoral. Lo que hay es un cambio de integración en la Comisión, donde la Consejera Electoral Adriana Favela estará en otras Comisiones distintas, y en consecuencia, un servidor no formará parte de la Comisión de Organización Electoral, y estaré en la del Servicio Profesional Electoral, que es distinto a presidirla._____

Eso es, no sé si usted tenga ese documento con esas características._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene usted el uso de la palabra el Licenciado Jaime Miguel Castañeda._____

El C. representante suplente de MORENA, Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas: Gracias, Consejero Presidente._____

Es que por eso contestaba que era de repente difícil darle seguimiento, porque la tabla que yo tengo de ayer es precisamente Adriana Favela presidiendo la Comisión del Servicio Profesional Electoral, e integrante el Consejero, pero es la que yo tengo, y entonces hubo muchos cambios._____

Es lo que yo tengo, y se los dije además, han habido cambios, ahora, me entero que el Consejero Electoral Ciro Murayama va a ser el que la presida._____

Y bueno, aun así, me parece que no todos están rotándose tanto como algunos, pero esa ya es una cuestión interna de ustedes, lo cual no significa que nosotros nos dejen muy a gusto, y eso lo señalamos._____

Muchas gracias, espero haberle dado respuesta Consejero Electoral Marco Antonio Baños._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor representante._____

Permítanme intervenir, porque creo que tal vez, la versión actualizada con el cambio que se está proponiendo ahora por parte de la Consejera Electoral Dania Ravel, está impactado por supuesto en el Acuerdo en su versión, hoy necesariamente engrosada a partir de este último cambio, pero tal vez, nada más para claridad de los miembros del Consejo General y recordando que el Punto Segundo del Acuerdo es el que contiene, digámoslo así, la definición tanto de las Presidencias como de las integraciones a partir de los cambios que se han hecho y me permito leerla muy rápido, para claridad, de la votación que se va a tomar._____

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, y por ende, el Comité de Radio y Televisión, estará presidido por la Consejera Electoral Adriana Favela e integrado por los Consejeros Electorales, Benito Nacif y Claudia Zavala._____

Por supuesto, obvio las Secretarías Técnicas porque son mandatas por Ley, en la mayoría de los casos de las Comisiones Permanentes._____

La Comisión del Servicio Profesional Electoral estará presidida por el Consejero Electoral Ciro Murayama, y se integrará por el Consejero Electoral Enrique Andrade, por el Consejero Electoral Marco Antonio Baños que sustituye en la versión que usted tiene a la Consejera Electoral Adriana Favela, por la Consejera Electoral Dania Ravel y el Consejero Electoral Jaime Rivera._____

La Comisión del Registro Federal de Electores estará presidida por el Consejero Electoral Marco Antonio Baños e integrada por los Consejeros Electorales, Enrique Andrade, Dania Ravel, Jaime Rivera y Pamela San Martín._____

La Comisión de Quejas y Denuncias estará presidida por la Consejera Electoral Claudia Zavala e integrada por la Consejera Electoral Adriana Favela y el Consejero Electoral Benito Nacif._____

Hay un orden de prelación que no sé si valga la pena, la Consejera Electoral Pamela San Martín, el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, el Consejero Electoral Enrique

Andrade, el Consejero Electoral Jaime Rivera, el Consejero Electoral Ciro Murayama, la Consejera Electoral Dania Ravel, el Consejero José Roberto Ruiz Saldaña._____

La Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales estará presidida por el Consejero Electoral Marco Antonio Baños e integrada por la Consejera Electoral Dania Ravel, el Consejero Electoral Jaime Rivera, la Consejera Electoral Claudia Zavala; la Comisión de Fiscalización estará presidida por el Consejero Electoral Benito Nacif e integrada por las y los Consejeros Electorales, Marco Antonio Baños, Adriana Favela, Ciro Murayama y Pamela San Martín._____

La Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica estará presidida por el Consejero Electoral Benito Nacif e integrada por las y los Consejeros Electorales Enrique Andrade, Ciro Murayama, Pamela San Martín y Claudia Zavala._____

La Comisión de Organización Electoral, por su parte estará presidida por el Consejero Electoral Jaime Rivera e integrada por los Consejeros Electorales Ciro Murayama y José Roberto Ruiz Saldaña._____

Por lo que hace a los grupos de trabajo, el de Transparencia estará presidido por el Consejero Electoral Enrique Andrade e integrada por las y los Consejeros Electorales Marco Antonio Baños, Adriana Favela, Dania Ravel y Claudia Zavala; el Comité Editorial, dado que se trata del Presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, estará presidida por el Consejero Electoral Benito Nacif, e integrada por el Consejero Electoral Enrique Andrade._____

Finalmente se crea la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales con la siguiente integración, presidiéndola por la Consejera Electoral Pamela San Martín, estoy hablando de la Temporal de Seguimiento al Proceso Electoral del próximo año, 2018 y 2019 y se integrará por las y los Consejeros Electorales Benito Nacif, Dania Ravel, Jaime Rivera y José Roberto Ruíz Saldaña._____

Por lo que hace a la Comisión de Género, una Comisión que como decía no entra dentro de la lógica de la rotación de las presidencias, el único cambio que se incorporaría, como lo ha presentado aquí la Consejera Electoral Dania Ravel, es que el Consejero Electoral Benito Nacif, que la integra actualmente sería sustituido en esta integración por el Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña, con eso estaría finiquitada, la integración o así quedaría la conformación del Proyecto de Acuerdo que se estaría

sometiendo a votación y por supuesto esto estará plasmado en su momento en el engrose. _____

Tiene toda la razón, así que aprovecho que todavía no se me ha acabado el tiempo para señalar la Comisión que estaría creándose, ésta que es sujeto, incluso del título del Acuerdo. La Comisión de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y análisis de las modalidades de voto, dado que hay que darle seguimiento a esta atribución legal al Instituto Nacional Electoral que tendría la integración siguiente: _____

La presidiría el Consejero Electoral Enrique Andrade Preside, y se integra por el Consejero Electoral Ciro Murayama, la Consejera Electoral Claudia Zavala, la Consejera Electoral Adriana Favela y el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. _____

Ofrezco una disculpa porque esto fue uno de los cambios que estarían impactando, con la adenda que se circuló sobre la mesa. _____

Si no hay intervenciones adicionales, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación correspondiente. _____

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto 18, tomando en consideración en esta votación la adenda circulada previamente, y la propuesta presentada por la Consejera Electoral Dania Ravel, a fin de hacer esa modificación a la Comisión Temporal de Género. _____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. _____

Aprobada por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello; no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández), Consejero Presidente. _____

Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, procederé a realizar el engrose de conformidad con los argumentos expuestos. _____

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG1305/2018) Ptos. 18 _____

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE MODIFICA LA INTEGRACIÓN DE DIVERSAS COMISIONES, SE RATIFICA LA ROTACIÓN DE LAS PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES PERMANENTES Y OTROS ÓRGANOS, ASÍ COMO SE CREAN LAS COMISIONES TEMPORALES DE SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2018-2019 Y, DE VINCULACIÓN CON MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y ANÁLISIS DE LAS MODALIDADES DE SU VOTO

G L O S A R I O

Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
INE	Instituto Nacional Electoral
LGIPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Reglamento Interior	Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral
Reglamento de Comisiones	Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral

A N T E C E D E N T E S

- I. El 8 de septiembre de 2017, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG408/2017, por el que se establece la integración de las comisiones permanentes, temporales y otros órganos del CG del INE, así como la creación de las comisiones temporales de debates y para el fortalecimiento

de la igualdad de género y no discriminación en la participación política en el marco del Proceso Electoral 2017-2018.

- II. El 12 de septiembre de 2017, los partidos políticos Encuentro Social, Morena, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, interpusieron sendos recursos de apelación a fin de impugnar el acuerdo señalado en el numeral anterior.
- III. El 5 de octubre de 2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el recurso de apelación SUP-RAP-616/2017 y acumulados, en el sentido de confirmar el Acuerdo INE/CG408/2017.

CONSIDERANDO

- 1. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafo primero y segundo de la Constitución, la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo, que es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento. En el ejercicio de estas funciones, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.
- 2. La citada disposición constitucional determina, a su vez, en su Base V, Apartado A, párrafos segundo y tercero, que el INE será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.
- 3. De conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo 1, de la LGIPE, el Consejo General es el órgano superior de dirección del INE, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios rectores señalados guíen todas las actividades del Instituto.
- 4. El artículo 42, párrafos 1 y 2, de la LGIPE, establecen que el Consejo General integrará las comisiones temporales que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones, las que siempre serán presididas

por un Consejero Electoral, las comisiones de: Capacitación Electoral y Educación Cívica; Organización Electoral; Prerrogativas y Partidos Políticos; Servicio Profesional Electoral Nacional; Registro Federal de Electores; Quejas y Denuncias; Fiscalización, y Vinculación con los Organismos Públicos Locales, funcionarán permanentemente y se integrarán exclusivamente por Consejeros Electorales designados por el Consejo General. Los Consejeros Electorales podrán participar hasta en cuatro de las comisiones antes mencionadas, por un periodo de tres años; la presidencia de tales comisiones será rotativa en forma anual entre sus integrantes.

Dicha previsión legal se encuentra reiterada en el artículo 9, párrafo 1, del Reglamento Interior.

Sobre la integración de las comisiones, este Consejo General al aprobar el Acuerdo INE/CG408/2017, sostuvo que de la interpretación gramatical, sistemática y funcional de dichos preceptos normativos se concluye que no hay prohibición para que uno o dos de los integrantes de las Comisiones Permanentes del Consejo General, puedan volver a conformar tales comisiones al concluir los 3 años para los que fueron designados inicialmente.

Elo, ya que la regla que dispone que los Consejeros Electorales podrán participar hasta en cuatro de las comisiones permanentes, por un periodo de tres años, solamente limita la posibilidad de que un Consejero Electoral, en cada trienio, integre un máximo de cuatro comisiones permanentes; pero de ninguna manera prohíbe que uno o dos Consejeros Electorales puedan integrar nuevamente alguna comisión permanente, una vez que concluyó el periodo de tres años para el que fueron designados inicialmente.

La referida interpretación fue confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-616/2017 y acumulados. De forma adicional, en dicha sentencia el órgano jurisdiccional sostuvo lo siguiente:

...

Asimismo, la interpretación sistemática y funcional de dichas normas, tampoco permite arribar a la conclusión sostenida por los partidos actores, ya que si bien es cierto que la obligación de renovación cada tres años tiene la finalidad de evitar una conformación estática de las comisiones, ello se

consigue con el cambio de alguno de sus integrantes, sin que sea necesaria la renovación total. Por ende, la finalidad perseguida con la norma se logra con la renovación parcial, tal como aconteció en la especie.

En este sentido, el artículo 42.2 se debe interpretar en el sentido de que el Consejo General debe emitir un acuerdo de comisiones cada tres años, en el que por lo menos uno de los integrantes de cada comisión debe cambiar, con el fin de imprimir dinamismo a la integración de las comisiones, sin que sea necesaria la renovación total del órgano en comento.

Lo anterior toda vez que la labor de las comisiones permanentes está dentro de la dinámica de planeación de la autoridad electoral nacional como un todo, sin que ello implique necesariamente que la renovación de sus integrantes tenga que atender la misma lógica, es decir, que tenga renovar en su totalidad al terminar el periodo de tres años, pues más bien atiende a la renovación escalonada de las y los integrantes del Consejo General, que se realiza cada tres años.

De ahí que, si bien cierto que en el acuerdo impugnado se determinó por la responsable que varios de las Consejeras o Consejeras integraran nuevamente las comisiones en las que ya participaban, tal circunstancia en forma alguna vulnera el principio de legalidad; pues como ya se demostró, no existe la prohibición de que vuelvan a participar en la comisión que venían integrando, en los artículos 42, párrafo 2, de la LGIPE y 9, párrafo 1, del Reglamento Interno del INE sino que la renovación únicamente debe de ser parcial, para lograr continuidad en las funciones que desarrollan las comisiones al ser órganos permanentes.

5. El artículo 44, párrafo 1, de la LGIPE, en sus incisos a) y jj), establece como atribuciones del Consejo General, aprobar y expedir los Reglamentos interiores para el debido ejercicio de las facultades y atribuciones del Instituto, así como dictar los Acuerdos necesarios para hacer efectivas las atribuciones señaladas en la ley.
6. Por su parte, el artículo 11, párrafos 1, 2 y 3 del Reglamento de Comisiones, determina que en todas las Comisiones permanentes, el periodo de la Presidencia durará un año contado a partir del día de la designación, a la conclusión de dicho periodo, los integrantes de la Comisión correspondiente en la siguiente sesión que celebren, designarán de común acuerdo al Consejero que asumirá las funciones de Presidente, respetando las reglas de rotación entre todos sus integrantes.

Dicha designación deberá ser ratificada por el Consejo General. Asimismo, se establece que la elección de integrantes y la rotación de presidencias se deberán llevar a cabo en la primera semana del mes de septiembre.

En ese sentido, este órgano al aprobar el Acuerdo INE/CG665/2016, interpretó que la normatividad es clara al establecer que las presidencias de las Comisiones permanentes del Consejo General deberán rotar su presidencia anualmente. Sin embargo, la regla que mandata la rotación en la primera semana de septiembre, solamente puede tener aplicación si ya se cumplió en la Comisión respectiva el plazo de un año en la presidencia.

Para arribar a dicha conclusión, el CG del INE invocó el criterio establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación SUP-RAP- 298/2016, en el cual se interpretó que la modificación del plazo de integración y rotación de presidencias en la primera semana del mes de septiembre de cada año en modo alguno significa dejar de aplicar el artículo 42 de la referida Ley General, pues dicha disposición únicamente refiere que se designarán las comisiones por tres años y las presidencias se rotarán anualmente entre sus integrantes, sin que haga mención a una fecha en específico.

Adicionalmente, en la sentencia SUP-RAP-616/2017 y acumulados se consideró que, tratándose de la regla de rotación de las Presidencias, la normatividad no prevé como restricción que alguna Consejera o Consejero pueda ser nuevamente designada a la presidencia en alguna comisión permanente, ya que la única limitante es que dicha designación sea en forma consecutiva.

7. En el artículo 10, párrafo 1, del Reglamento Interior, se dispone que el Consejo General integrará las Comisiones Temporales que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones, con tres o cinco Consejeras y Consejeros, y siempre serán presididas por uno de ellos.
8. El artículo 13, párrafo 1, incisos j) y k), del Reglamento Interior, establece como atribuciones de los Consejeros Electorales del Consejo General, presidir e integrar las comisiones que determine el Consejo y participar con derecho a voz y voto en sus sesiones.
9. Los artículos 4, párrafo 1, inciso b) y 6, párrafo 1 y 2, del Reglamento de Comisiones, señala que las Comisiones temporales serán aquellas

creadas por Acuerdo del Consejo para la atención de un asunto preciso y específico para el desempeño de sus atribuciones, y cuyo desahogo dará lugar a su disolución, mismas que serán presididas por un Consejero Electoral.

El Acuerdo de creación de las Comisiones Temporales deberá contener, la motivación y fundamentación de la creación de la Comisión, su integración, su objeto específico y en su caso las actividades a realizar; así como los plazos o condiciones para dar por terminado el asunto y, en consecuencia, para extinguir la Comisión, así como la obligación de su Presidente de informar al Consejo cuando se actualice este supuesto.

10. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de Comisiones del INE, las Comisiones Temporales, entre otras, tendrán las atribuciones siguientes:
 - Discutir y aprobar los Dictámenes, Proyectos de Acuerdo, de Resolución y, en su caso, los informes que deban ser presentados al Consejo, así como conocer los informes que sean presentados por los Secretarios Técnicos en los asuntos de su competencia;
 - Solicitar información a otras Comisiones o a cualquier órgano del Instituto que pudiera considerarse necesaria. Tratándose de información en el ámbito de competencia de los órganos desconcentrados, deberá requerirse por conducto del Secretario Técnico;
 - Solicitar información a autoridades diversas al Instituto, por conducto del Consejero Presidente, y a particulares por conducto del Secretario y las demás que deriven de la Ley, del Reglamento Interior, de los Acuerdos de creación de las propias comisiones, de los Acuerdos del Consejo y de las demás disposiciones aplicables.
11. En atención a lo establecido en el artículo 10, párrafo 5, del Reglamento de Comisiones, en las comisiones podrán participar, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, así como los representantes de los partidos políticos, salvo en la del Servicio Profesional Electoral Nacional, Quejas y Denuncias y Fiscalización.

Modificación en la integración de Comisiones del Consejo General.

12. En el Acuerdo INE/CG408/2017, el Consejo General aprobó, entre otros aspectos, la integración de las siguientes Comisiones:

Comisión	Integración aprobada Acuerdo INE/CG408/2017
Registro Federal de Electores	<ul style="list-style-type: none"> • Lic. Enrique Andrade González (P) • Mtro. Marco Antonio Baños Martínez • Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas • Mtro. Jaime Rivera Velázquez
Servicio Profesional Electoral Nacional	<ul style="list-style-type: none"> • Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas (P) • Dra. Adriana M. Favela Herrera • Dr. Ciro Murayama Rendón Integrante Lic. Enrique Andrade González • Mtro. Jaime Rivera Velázquez
Organización Electoral	<ul style="list-style-type: none"> • Mtro. Jaime Rivera Velázquez (P) • Mtro. Marco Antonio Baños Martínez • Dr. José Roberto Ruiz Saldaña
Temporal para el fortalecimiento de la igualdad de género y no discriminación en la participación política en el marco del Proceso Electoral 2017-2018.	<ul style="list-style-type: none"> • Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas (P) • Dra. Adriana Margarita Favela Herrera • Dr. Benito Nacif Hernández • Mtro. Jaime Rivera Velázquez • Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez

El artículo 42, numeral 4 de la LGIPE establece que todas las comisiones se integrarán con un mínimo de tres y un máximo de 5 Consejeros Electorales. También señala que podrán integrar hasta 4 Comisiones Permanentes.

En ese sentido, dado que no hay restricción normativa para que algún Consejero Electoral, de manera voluntaria, decida dejar de formar parte de alguna comisión o se integre a ésta una vez aprobada su conformación, es que resulta apegado a derecho modificar la integración de las siguientes Comisiones del Consejo General:

Comisión	Consejera o Consejero Electoral que deja de integrar la Comisión	Consejera o Consejero Electoral que se incorpora a la Comisión
Registro Federal de Electores	-	Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles
Servicio Profesional Electoral Nacional	Dra. Adriana M. Favela Herrera.	Mtro. Marco Antonio Baños Martínez
Organización Electoral	Mtro. Marco Antonio Baños Martínez	Dr. Ciro Murayama Rendón.
Temporal para el fortalecimiento de la igualdad de género y no discriminación en la participación política en el marco del Proceso Electoral 2017-2018.	Dr. Benito Nacif Hernández	Dr. José Roberto Ruiz Saldaña

Adicionalmente, la incorporación es acorde a lo establecido en el citado artículo 42, numeral 2 de la LGIPE, que establece como límite a las y los Consejeros Electorales integrar hasta 4 comisiones permanentes del Consejo General.

La Consejera Electoral, Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, actualmente integra 2 Comisiones Permanentes (Fiscalización y Capacitación Electoral y Educación Cívica), es decir, con su incorporación

a la del Registro Federal de Electores estaría integrando 3, por lo que se ajusta al límite legal.

De igual forma, ya tomando en consideración la propuesta de integración del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, se advierte que estaría integrando 4, esto es, Registro Federal de Electores, Servicio Profesional Electoral Nacional, Vinculación con Organismos Públicos Locales y Fiscalización. Por ello, hay conformidad con lo establecido en el citado artículo 42.

Igual caso acontece con el Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón. A partir del cambio identificado en la tabla anterior, dicho Consejero estaría integrando 4 Comisiones Permanentes, esto es, Capacitación y Educación Cívica, Servicio Profesional Electoral Nacional, Organización Electoral y Fiscalización.

Rotación de Comisiones.

13. Las Comisiones permanentes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que se identifican en el cuadro que se inserta, realizaron la rotación de su presidencia en los siguientes términos:

Comisión	Comunicación rotación presidencia comisión	Fecha de emisión	Presidente saliente	Presidente entrante
Registro Federal de Electores	INE/CRFE-02SE:10/09/2018	10/09/2018	Lic. Enrique Andrade González	Mtro. Marco Antonio Baños Martínez
Quejas y Denuncias	ACQyD-INE-177/2018	6/09/2018	Dra. Adriana Margarita Favela Herrera	Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez
Vinculación con Organismos Públicos Locales.	INE/CVOPL/006/2018	6/09/2018	Mtro. Jaime Rivera Velázquez	Mtro. Marco Antonio Baños Martínez
Prerrogativas y Partidos Políticos, y	INE/DEPPP/STCPPP/022/2018	6/09/2018	Dr. Benito Nacif Hernández	Dra. Adriana Margarita

Comisión	Comunicación rotación presidencia comisión	Fecha de emisión	Presidente saliente	Presidente entrante
Comité de Radio y Televisión				Favela Herrera
Fiscalización	CF/014/2018	10/09/2018	Dr. Ciro Murayama Rendón	Dr. Benito Nacif Hernández
Servicio Profesional Electoral Nacional	INE/DESPEN/1884/2018	10/09/2018	Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas	Dr. Ciro Murayama Rendón

14. Por lo que hace a las comisiones permanentes de Organización Electoral, así como de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la presidencia sigue rigiéndose por lo establecido en el Acuerdo INE/CG408/2017. En dicho acuerdo se determinó lo siguiente:

A) Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica

Nombre	Cargo
Dr. Benito Nacif Hernández	Presidente

B) Comisión de Organización Electoral

Nombre	Cargo
Mtro. Jaime Rivera Velázquez	Presidente

La razón por la que sigue vigente lo establecido en el Acuerdo INE/CG408/2017 para las citadas comisiones, es que éstas no han desempeñado en lo individual las atribuciones que les confiere la propia normatividad electoral.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 42, numeral 3 de la LGIPE, las comisiones permanentes de Capacitación Electoral y Educación Cívica y

de Organización Electoral, deben fusionarse para integrar la Comisión de Capacitación y Organización Electoral.

En aplicación del citado precepto legal, el 8 de septiembre de 2017 se aprobó la fusión de las referidas comisiones a través del Acuerdo INE/CG408/2017. En éste se estableció lo siguiente:

30. Por lo que hace a la integración y funcionamiento de las comisiones de Capacitación Electoral y Educación Cívica, así como de Organización Electoral, en lo individual, surtirán efectos una vez que concluyan sus funciones como comisiones unidas.

En ese sentido, el 30 de agosto del presente año, se presentó el informe final de actividades ante los integrantes de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral.

Ante el hecho notorio consistente en que las comisiones de Capacitación Electoral y Educación Cívica, así como de Organización Electoral, no han ejercido sus atribuciones de manera individual, es que no aplica respecto de éstas la regla de rotación de un año establecida en los artículos 42, numeral 2 de la LGIPE, 9, párrafo 1 del Reglamento Interior y 11 del Reglamento de Comisiones.

15. Por lo que hace al grupo de trabajo en materia de transparencia, mediante Acuerdo INE/CG363/2016 se mandató su creación, así como su integración, misma que tiene una naturaleza permanente hasta en tanto este Consejo determine lo conducente.

En el multicitado Acuerdo INE/CG408/2017, fue aprobado por el Consejo General la integración del referido grupo de trabajo, cuya presidencia recayó en el Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez.

16. Tratándose del Comité Editorial, con fundamento en el artículo 5 de los Lineamientos para Regular el Proceso de Producción Editorial del Instituto Nacional Electoral y el funcionamiento del Comité Editorial, corresponde al Consejero Dr. Benito Nacif Hernández la presidencia de dicho órgano, en

su carácter de Presidente de la Comisión Permanente de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

Asimismo, se designa como integrante con derecho a voz y voto en el Comité al Consejero Electoral, Lic. Enrique Andrade González.

Comisión Temporal de seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019.

17. A partir de la experiencia en el desarrollo de procesos electorales no concurrentes en 2015, 2016 y 2017, resulta necesario continuar con la existencia de una Comisión Temporal que de formal seguimiento a las actividades de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, con el propósito de que se vigilen y garanticen, en tiempo y forma, el ejercicio de atribuciones que el Instituto Nacional Electoral tiene constitucional y legalmente encomendadas.

Es decir, la capacitación electoral, la ubicación de casillas, la designación de funcionarios de mesas directivas y las demás actividades inherentes a dichos procesos, constituyen el punto medular sobre el cual se desarrolle las actividades de la comisión que se propone crear, incluyendo la vigilancia del cumplimiento de los objetivos que se establezcan en el Plan y Calendario Integral de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, ya sean de carácter ordinario o extraordinario.

18. De esta manera, la Comisión Temporal para el seguimiento a las actividades de los Procesos Electorales Locales 2018-2019 tendrá las siguientes funciones:

- 1) Dar seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para los Procesos Electorales Locales 2018- 2019.
- 2) Vigilar que se cumplan los actos y plazos previstos para el calendario.
- 3) Contribuir a la vinculación con los Organismos Públicos Locales a fin de garantizar que el ejercicio de las funciones que corresponden al Instituto en los Procesos Electorales Locales 2018-2019, se lleven a cabo de manera eficiente y adecuada.

4) Dar seguimiento a los procesos electorales extraordinarios a celebrarse en 2018 y 2019.

19. La Comisión Temporal para el seguimiento a las actividades de los Procesos Electorales Locales 2018-2019 se extinguirá a la conclusión de dichos procesos.

Comisión Temporal de vinculación con mexicanos residentes en el extranjero y análisis de las modalidades de su voto.

20. El artículo 101, párrafo 3 del Reglamento de Elecciones, establece que el Consejo General podrá integrar una comisión temporal para atender y dar seguimiento a las actividades relativas al voto de los mexicanos en el extranjero.
21. A efecto de continuar con el seguimiento a los trabajos de planeación, preparación, organización e instrumentación del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, es necesaria la creación de una Comisión Temporal del Consejo General que supervise el desarrollo de los trabajos, actividades y proyectos para el ejercicio del citado derecho.

Resulta indispensable mantener una comunicación permanente con la comunidad de mexicanos que residen fuera del territorio nacional a efecto de tomar en consideración sus propuestas en las actividades que desarrolle el Instituto Nacional Electoral y así garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de su derecho al voto, tanto en elecciones federales como en las locales de las entidades federativas, cuya legislación local lo contemple.

Asimismo, el Instituto Nacional Electoral debe dar continuidad al análisis y estudio de las diversas modalidades de voto de mexicanos residente en el extranjero previstas en la legislación correspondiente. Lo anterior para tener un espacio de tiempo suficiente para la discusión, desarrollo e implementación de dichas modalidades.

Adicionalmente, es obligación de los organismos públicos electorales locales de aquellas entidades federativas cuyas legislaciones contemplen el voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, en términos de lo dispuesto en el artículo 101, párrafo 2 del Reglamento de Elecciones, implementar las acciones necesarias para la instrumentación del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, a partir de los Lineamientos que emita el Consejo General del Instituto y los convenios generales de coordinación y colaboración que se celebren.

22. En ese sentido, la Comisión tendrá las siguientes funciones:
 - a) Aprobar el programa de trabajo, que será presentado por la Secretaría Técnica y en el que se establecerá el calendario de sesiones de la Comisión.
 - b) Informar al Consejo General respecto del seguimiento de las actividades relacionadas con el voto de los mexicanos residentes en el extranjero.
 - c) Coordinar las acciones de vinculación con la comunidad residente en el extranjero y el análisis de las modalidades de su voto.
 - d) Presentar los informes que le sean requeridos en la materia, así como atender y dar seguimiento a los requerimientos que le sean encomendados por el Consejo General.
 - e) Las demás que le confiera el Consejo General y la normatividad aplicable.
23. La Comisión de vinculación con mexicanos residentes en el extranjero y análisis de las modalidades de su voto se extinguirá al año siguiente a la aprobación de este Acuerdo, previo informe que se rinda al Consejo General.

En virtud de los antecedentes y consideraciones señalados, el Consejo General emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se modifica la integración de las Comisiones Permanentes del Registro Federal de Electores, del Servicio Profesional Electoral Nacional y de Organización Electoral, así como la Comisión temporal para el fortalecimiento de la igualdad de género y no discriminación en la participación política en el marco del Proceso Electoral 2017-2018, aprobadas en el Acuerdo INE/CG408/2017, en los siguientes términos:

Comisión	Consejera o Consejero Electoral que deja de integrar la Comisión	Consejera o Consejero Electoral que se integra a la Comisión
Registro Federal de Electores	-	Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles
Servicio Profesional Electoral Nacional	Dra. Adriana M. Favela Herrera.	Mtro. Marco Antonio Baños Martínez
Organización Electoral	Mtro. Marco Antonio Baños Martínez	Dr. Ciro Murayama Rendón.

Comisión	Consejera o Consejero Electoral que deja de integrar la Comisión	Consejera o Consejero Electoral que se integra a la Comisión
Temporal para el fortalecimiento de la igualdad de género y no discriminación en la participación política en el marco del Proceso Electoral 2017-2018.	Dr. Benito Nacif Hernández	Dr. José Roberto Ruiz Saldaña

SEGUNDO. Se ratifica la rotación de las Presidencias de las Comisiones Permanentes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, quedando la integración de la siguiente forma:

COMISIONES PERMANENTES

A) Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, y Comité de Radio y Televisión.

Nombre

Cargo

Dra. Adriana Margarita Favela Herrera

Presidenta

Dr. Benito Nacif Hernández

Integrante

Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez

Integrante

Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos

Secretario

Técnico

Consejeros del Poder Legislativo

Representantes de los Partidos Políticos

B) Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Nombre	Cargo
Dr. Ciro Murayama Rendón	Presidente
Lic. Enrique Andrade González	Integrante
Mtro. Marco Antonio Baños Martínez	Integrante
Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas	Integrante
Mtro. Jaime Rivera Velázquez	Integrante
Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional	Secretario Técnico

C) Comisión del Registro Federal de Electores.

Nombre	Cargo
Mtro. Marco Antonio Baños Martínez	Presidente
Lic. Enrique Andrade González	Integrante
Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas	Integrante
Mtro. Jaime Rivera Velázquez	Integrante
Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles	Integrante
Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores	Secretario Técnico

Consejeros del Poder Legislativo:
Representantes de los Partidos Políticos

D) Comisión de Quejas y Denuncias.

Nombre	Cargo
Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez	Presidenta
Dra. Adriana Margarita Favela Herrera	Integrante
Dr. Benito Nacif Hernández	Integrante
Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral	Secretario Técnico

Orden de Prelación suplentes:

Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles
Mtro. Marco Antonio Baños Martínez

Lic. Enrique Andrade González
Mtro. Jaime Rivera Velázquez
Dr. Ciro Murayama Rendón
Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas
Dr. José Roberto Ruiz Saldaña

E) Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales.

Nombre	Cargo
Mtro. Marco Antonio Baños Martínez	Presidente
Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas	Integrante
Mtro. Jaime Rivera Velázquez	Integrante
Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez	Integrante
Titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales	Secretaria Técnica
Consejeros del Poder Legislativo	
Representantes de los Partidos Políticos	

F) Comisión de Fiscalización.

Nombre	Cargo
Dr. Benito Nacif Hernández	Presidente
Mtro. Marco Antonio Baños Martínez	Integrante
Dra. Adriana Margarita Favela Herrera	Integrante
Dr. Ciro Murayama Rendón	Integrante
Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles	Integrante
Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización	Secretario Técnico

G) Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica

Nombre	Cargo
Dr. Benito Nacif Hernández	Presidente
Lic. Enrique Andrade González	Integrante
Dr. Ciro Murayama Rendón	Integrante

Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles
Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez
Titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación
Electoral y Educación Cívica

Integrante
Integrante
Secretario
Técnico

Consejeros del Poder Legislativo
Representantes de los Partidos Políticos

H) Comisión de Organización Electoral

Nombre

Cargo

Mtro. Jaime Rivera Velázquez
Dr. Ciro Murayama Rendón
Dr. José Roberto Ruiz Saldaña

Presidente
Integrante
Integrante

Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Secretario
Técnico

Consejeros del Poder Legislativo
Representantes de los Partidos Políticos

Grupos de Trabajo y Comités

A) Grupo de Trabajo en Materia de Transparencia

Nombre

Cargo

Lic. Enrique Andrade González
Mtro. Marco Antonio Baños Martínez
Dra. Adriana Margarita Favela Herrera
Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas
Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez

Presidente
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante

Titular de la Unidad Técnica de Transparencia y
Protección de Datos Personales

Secretaria
Técnico

B) Comité Editorial

Nombre

Cargo

Dr. Benito Nacif Hernández
Lic. Enrique Andrade González

Presidente
Integrante

TERCERO. Se crea la Comisión temporal para el seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, con la siguiente integración.

Nombre	Cargo
Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles	Presidenta
Dr. Benito Nacif Hernández	Integrante
Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas	Integrante
Mtro. Jaime Rivera Velázquez	Integrante
Dr. José Roberto Ruiz Saldaña	Integrante
Director Ejecutivo de Organización Electoral	Secretario
	Técnico
Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica	Secretario
	Técnico
Titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales	Invitado
	Permanente
Titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática	Invitado
	Permanente
Consejeros Poder Legislativo.	
Representantes de los Partidos Políticos.	

CUARTO. La Comisión temporal de seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, tendrá las siguientes funciones:

- 1) Dar seguimiento al cumplimiento de la estrategia de capacitación y asistencia electoral para los Procesos Electorales Locales 2018-2019.
- 2) Vigilar que se cumplan los actos y plazos previstos para el calendario.
- 3) Contribuir a la vinculación con los Organismos Públicos Locales a fin de garantizar que el ejercicio de las funciones que corresponden al instituto en los Procesos Electorales Locales 2018-2019, se lleven a cabo de manera eficiente y adecuada.
- 4) Dar seguimiento a los procesos electorales extraordinarios a celebrarse en 2018 y 2019.

QUINTO. La Comisión temporal para el seguimiento a las actividades de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, entrará en funciones al día siguiente de la aprobación del presente Acuerdo y concluirá sus actividades al término de dichos procesos, previo informe que se rinda al Consejo General.

SEXTO. Se crea la Comisión Temporal de vinculación con mexicanos residentes en el extranjero y análisis de las modalidades de su voto, con la siguiente integración:

Nombre	Cargo
Lic. Enrique Andrade González	Presidente
Dr. Ciro Murayama Rendón	Integrante
Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez	Integrante
Dra. Adriana Margarita Favela Herrera	Integrante
Mtro. Marco Antonio Baños Martínez	Integrante
Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores	Secretario Técnico

Consejeros Poder Legislativo.
Representantes de los Partidos Políticos.

SÉPTIMO. La Comisión Temporal de vinculación con mexicanos residentes en el extranjero y análisis de las modalidades de su voto, tendrá las siguientes funciones:

- Aprobar el programa de trabajo, que será presentado por la Secretaría Técnica y en el que se establecerá el calendario de sesiones de la Comisión.
- Informar al Consejo General respecto del seguimiento de las actividades relacionadas con el voto de los mexicanos residentes en el extranjero.
- Coordinar las acciones de vinculación con la comunidad residente en el extranjero y el análisis de las modalidades de su voto.
- Presentar los informes que le sean requeridos en la materia, así como atender y dar seguimiento a los requerimientos que le sean encomendados por el Consejo General.
- Las demás que le confiera el Consejo General y la normatividad aplicable.

OCTAVO. La Comisión Temporal de vinculación con mexicanos residentes en el extranjero y análisis de las modalidades de su voto, se extinguirá al año siguiente a la aprobación de este Acuerdo, previo informe que se rinda al Consejo General.

NOVENO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por este Consejo General.

DÉCIMO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

También le pido que publique el Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación. _____

Le pido que continúe con el siguiente asunto del orden del día, Secretario del Consejo. _____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente asunto es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Protocolo para la implementación de buenas prácticas en el ejercicio de los recursos del gasto programado: capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado. _____

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral Ciro Murayama. _____

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero Presidente. _____

La Comisión de Fiscalización, junto con la de género, trabajamos con las Unidades respectivas, para promover que llegara acatando además un mandato de este Consejo General, a esta sesión, el protocolo para la implementación de buenas prácticas en el ejercicio de los recursos del gasto programado para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. _____

Este documento pretende ser una guía de orientación para los partidos políticos en el mejor uso y destino de sus recursos, como parte de sus obligaciones en materia de igualdad política, dando respuesta a 3 preguntas fundamentales en la elaboración de sus planes anuales de trabajo, cómo planear, en qué gastar y cómo comprobarlo. _____

La Ley mandata a los partidos políticos en el nivel Federal, a destinar el 3 por ciento de sus recursos ordinarios al liderazgo político de las mujeres y en las entidades, este porcentaje varía. _____

Lamentablemente, en el pasado hemos tenido malas prácticas de simulación o de desatención en el ejercicio de este gasto, es así que en 2015 de los 225 millones de pesos que los partidos políticos debían destinar a este rubro, dejaron de ejercer 27 millones, y en 2016 tenían que destinar 226 millones y dejaron de ejercer 26 millones. Esto quiere decir que alrededor del 12 por ciento del gasto que tienen etiquetado para impulsar el liderazgo de las mujeres, no se ejerce. Y eso da lugar a que la autoridad aplique una sanción, e incluso, que ese dinero sea multado a los partidos políticos generando, un círculo vicioso que parte de una mala organización y terminan lesionándolos financieramente. _____

El nivel de cumplimiento por partido político es distinto, a nivel Federal en donde aparentemente la observancia es mayor, hay partidos que incluso llegan a gastar más de lo que la Ley les exige, en el liderazgo de la mujer. Pero, tenemos problemas en prácticamente todas las entidades federativas, porque, incluso, partidos políticos que cumplen a nivel Federal, no lo hacen en el plano Local, donde existe una enorme heterogeneidad, por ejemplo, mientras estados como: Sonora, Jalisco, Nuevo León; en promedio los partidos políticos llegan al 99 por ciento del gasto programado, entidades como Tamaulipas y Baja California muestran un cumplimiento de apenas el 17 por ciento. _____

En las revisiones que hace la autoridad electoral del gasto, hemos encontrado que los partidos políticos llegan a justificarnos como gasto en liderazgo de la mujer: compra de bocinas, mochilas, combustible, detergentes, bordado de blusas, tóner para impresoras, tiempo aire, pulseras alusivas a las campañas contra el Cáncer de Mama, papelería o incluso, la impresión de la biografía de un líder político hombre; en todos los casos el Instituto Nacional Electoral ha rechazado esta justificación de gasto y, hemos detectado, desconocimiento del tema deficiente planeación, ausencia de diagnósticos, objetivos que no están orientados a atender un problema métase en claridad y hay que decirlo con honestidad, problemas de simulación. _____

¿Qué es lo que recomendamos entonces? Que mejoren la planeación, realicen diagnósticos, formulen sus programas anuales de trabajo, para que se ejerza el recurso

durante todo el año, y no solo en el último trimestre, que se acerquen con organizaciones de la Sociedad Civil, con instituciones académicas, expertas en género y equilibren el gasto en los diferentes subrubros en los que además se presentan sugerencias puntuales. _____

Por ejemplo, estamos sugiriendo que el capítulo de capacitación: que den seguimiento a las mujeres beneficiarias, creen expedientes únicos, concluyan los ciclos de formación que permitan a las mujeres completar los programas estructurados, buscar capacitaciones al nivel nacional e internacional. _____

En el subrubro de investigación: que se cuente con protocolos de investigación, con estudios novedosos. _____

Y en lo que hace a difusión y divulgación: la realización de campañas sobre el ejercicio del poder sin violencia, de acciones afirmativas para mujeres indígenas, líderes comunitarias, etcétera. _____

Lo que hemos encontrado es que existen fortalezas, amenazas, y debilidades y oportunidades de los partidos políticos en esta materia, entre las fortalezas la buena noticia es que hay una disposición normativa que obliga a destinar al menos el 3 por ciento, a invertir expresamente en el liderazgo de las mujeres que tenemos experiencia acumulada en el tema, y que cada vez hay más mujeres candidatas; así como en puestos de elección popular que seguramente seguirán dándole importancia y relevancia al tema, como lo veremos en la sesión que sigue a propósito de, una muy oportuna reacción en instituciones y en partidos políticos frente al caso de Chiapas. Entre las debilidades, está el incumplimiento de la norma, la falta de perspectiva de género, la heterogeneidad en la conducta de los partidos políticos, la alta rotación del personal en los propios partidos, que implica no tener personal especializado en la materia. _____

En las oportunidades encontramos la presencia de cada vez más mujeres en cargos legislativos y de Gobierno, pero también lo que John King ha llamado una democracia monitoreada, que exige que los partidos políticos transparenten el uso de sus recursos,

lo que se complementa con una fiscalización más fuerte que en vez de ser punitiva quiere ser un instrumento para mejorar la vida institucional de los partidos políticos.____
De tal manera que lo que estamos proponiendo, no es una ruta para seguir repitiendo lo que hemos encontrado, es decir, incumplimiento y sanción de la autoridad. Lo que queremos es a partir de este diagnóstico dar este protocolo, esta guía que además se va a complementar con herramientas para que se puedan cargar los planes anuales de trabajo en el Sistema Integral de Fiscalización y puedan tener respuestas de la autoridad electoral, a fin de que este recurso no se desperdicie, no acabe en multas cuando debe ser, no le llamaría un gasto, sino una inversión en el liderazgo político de la mujer, me parece que es un tema fundamental de la vida democrática, que no hay partido político que pueda escapar a un mayor desarrollo y encontrar más espacios para el liderazgo y la participación política de las mujeres._____
Éste es un documento, entonces, que lo que quiere es superar malas prácticas, y construir una sinergia positiva entre autoridad y partidos políticos._____
Es todo, gracias._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Electoral **Ciro Murayama**._____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral **Dania Ravel**._____

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero Presidente._____

A partir del año 2014, los partidos políticos tienen la obligación de destinar anualmente al menos el 3 por ciento de su financiamiento público para promover los liderazgos femeninos, sin embargo, la historia del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres ha demostrado que muchas veces los logros normativos no se ven plasmados en la vida real._____

Este rubro no es la excepción, por lo tanto, presentamos este protocolo que lo que busca es plantear la necesidad de cómo poder quitar las resistencias y los pretextos para el incumplimiento a este mandato, cómo poder eliminar una simulación en los cumplimientos, simulación que hemos visto, primero, para cumplir las cuotas de género

cuando surgieron las llamadas “Juanitas”, cuando se mandaba a las mujeres a los Distritos perdedores a los lugares donde los partidos políticos que las postulaban no tenían ninguna posibilidad de ganar._____

Después, una simulación o un intento de simulación en el cumplimiento ya del principio de paridad, que acabamos de ver en Chiapas._____

Por último, tenemos este rubro, en donde, en muchas ocasiones se gasta este dinero en actividades que no tienen absolutamente nada que ver con la promoción de los liderazgos femeninos._____

Así, llegamos a este protocolo que busca eliminar, por lo menos, pretextos basados en la ignorancia, en decir que no se sabe cómo se debe de gastar este dinero, qué actividades sí se pueden realizar y qué actividades no._____

Por lo tanto, una de las cuestiones que más me gustan a mí de este Protocolo es que es una recopilación de todas las actividades y conductas que en su momento han sido sancionadas por la autoridad fiscalizadora, porque no han cumplido los partidos políticos con destinar de manera eficiente el 3 por ciento de sus recursos para la promoción de los liderazgos femeninos._____

Pero, no solamente eso, también en este Protocolo podemos ver cómo si se pueden realizar de manera adecuada actividades similares._____

Entonces, ciertamente, es un instrumento especializado, técnico, pero al mismo tiempo hace un esfuerzo por ser didáctico, hace una ilustración, por ejemplo, de cómo se puede hacer un programa anual de trabajo._____

Sabemos que los Programas Anuales de Trabajo (PAT) son elementales para tener un gasto eficiente de los recursos, particularmente en este rubro es muy importante que se sepa cómo se van a destinar estos recursos._____

Una de las partes que más me llaman la atención, y me parece que puede resultar más útil con relación a este Protocolo, es que se hace una recopilación de buenas prácticas a nivel regional, buenas prácticas en cuanto a la promoción de liderazgos femeninos, qué tipo de investigaciones sí se pueden realizar._____

Eso es muy útil para quien implemente este Protocolo, porque se pueden implementar entonces investigaciones novedosas, pero siempre que no se pierda la brújula, cuál es la ruta que se tiene que seguir para así tener un gasto eficiente de, al menos, este 3 por ciento, porque lo hemos dicho y lo reitero, el 3 por ciento es el mínimo, pero también buscamos que sea reconocido por los partidos políticos, que gasten más dinero para las mujeres y para su promoción de liderazgo femenino._____

Ahora, en cuanto a las mujeres de los partidos políticos, una de las cuestiones que se han destacado en reuniones, con titulares de organismos de mujeres de los partidos políticos, es que a veces existe violencia dentro de los partidos políticos, y no es lo mismo lo que pasa una mujer en determinado partido político que en otro._____

Por eso una de las recomendaciones que se hace para tener una capacitación eficiente es hacer planes a partir de diagnósticos, de discriminación, desigualdad y violencia por cada partido político, y a partir de eso poder trabajar._____

El viernes pasado, tuvimos una reunión con organizaciones de la sociedad civil, con academias, con las Legisladoras, también se invitó a las Titulares de los Organismos de Mujeres de los Partidos Políticos, nos hicieron saber sus observaciones. Derivado de eso se hicieron algunas adecuaciones de forma al Protocolo que se presenta ahora, y se mejoró la motivación._____

Sé que todavía puede haber áreas de oportunidad, y estoy segura que vamos a detectarlas, sobre todo después de la primera implementación que hagamos de este Protocolo._____

Pero, sin embargo, este es un documento dinámico que se tiene que ir modificando a partir de la experiencia, no es un documento estático, y creo que al igual que pasó con el Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres, podemos pensar en fechas próximas, hacer una segunda edición, tercera, las que sean necesarias.____

Como sea, creo que se debe de reconocer que esto es un acercamiento, un primer acercamiento, loable al tema, que va a resultar muy útil, y, sobre todo, a nivel estatal, en donde muchas veces es donde se tienen más dudas de cómo poder ejercer este dinero, y en donde hemos visto que existen más áreas de oportunidad._____

Esto va a ser una guía para orientar los trabajos que van a realizar, que me parece que va a resultar de mucha utilidad, y, sobre todo, va lograr la finalidad que estamos buscando, que realmente este recurso se emplee para fomentar más liderazgos femeninos, para lograr capacitación eficiente, no solamente para las mujeres, sino también para los propios partidos políticos, y los hombres que están, que muchas veces son los que ejercen la violencia en contra de las mujeres. _____

Ahora, hay que decir también que, una de las cuestiones a las que nos comprometimos en la Comisión de Género en torno a este Protocolo fue, además de llevar a cabo una reunión de trabajo, misma que mencionaba, se realizó el 7 de septiembre, a presentarlo en la Comisión de Género. _____

Este Protocolo se presentó en la Comisión de Género, trabajando unida con la Comisión de Fiscalización el 29 de agosto pasado. Se mandó a las organizaciones de la Sociedad Civil desde el 28 de agosto para recabar sus observaciones. _____

Reitero, hemos tomado en cuenta las observaciones que nos han hecho llegar, no obstante, estamos conscientes que todavía es un documento perfectible, seguiremos en una revisión constante del mismo, y en su momento haremos una segunda edición, pero como sea, es importante destacar que es relevante tener este documento, esta guía, esta orientación para hacer los trabajos que tienen obligación de realizar los partidos políticos. _____

Gracias, Consejero Presidente. _____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel. _____

Permítanme intervenir en este punto. _____

Quiero comenzar saludando la presencia en este salón de Paula Peña y Teresa Hevia, ambas integrantes de “Mujeres en Plural”, que es una organización, entre otras de las que nos ha acompañado en la construcción de este Protocolo que hoy presentamos ante el Consejo General, pero además aliadas estratégicas de las causas comunes que esté Instituto ha acompañado y ha abanderado en la lógica de construir una sociedad

y un Sistema Político 50 a 50, un Sistema Político Igualitario, en el que el combate a todo tipo de violencia política por cuestión de género, ha sido causa común. _____

El Protocolo que hoy estamos por aprobar, se explica como una reacción del Instituto Nacional Electoral a una serie de inercias culturales, estereotipos de género y prácticas de simulación con las que, desde algunos partidos políticos en múltiples ocasiones se ha visto limitado el liderazgo político de las mujeres. _____

Los casos no aceptados en su momento, como ya se mencionaba por parte del Consejero Electoral Ciro Murayama, de tipos de conceptos de gastos que se han pretendido presentar ante esta autoridad como justificantes de la erogación del 3 por ciento del financiamiento político, para el liderazgo político de las mujeres, es la mejor prueba justamente de esto que menciona, es decir, de estos ejercicios de simulación. _
Sobre la simulación, basta recordar que las mujeres eran postuladas a lo largo del tiempo y como ejemplos emblemáticos de una génesis que afortunadamente se ha encaminado hacia otro lado, eran postuladas en espacios de reelección que se sabían perdidos de ante mano, se le asignaban candidaturas para después de la votación obligarlas a renunciar para que fueran suplidas por hombres, como sucedió, como se mencionaba con el famoso y tristemente célebre caso de “Las Juanitas”, y que hoy lamentablemente se está reeditando por parte de algunos partidos políticos en el estado de Chiapas, cosa que ha ameritado la intervención y ameritará la intervención en la siguiente sesión de esta institución. _____

O bien, el caso del dinero etiquetado para fomentar su participación política, la forma de ejercerlo en muchas ocasiones como se ha mencionado o reflejado improvisación y cierto desdén, se gastaba sin una planeación, sin un diagnóstico y reiteradamente se han venido reportando subejercicios. _____

Dicho de otra manera, no son pocos los casos en los que se simulaba que se fomentaba el liderazgo político de las mujeres, una obligación de Ley para las fuerzas políticas y que se les incluía en la toma de decisiones, pero con base en adecuaciones normativas, decisiones institucionales y jurisdiccionales, así como con la participación decidida de

las organizaciones de la sociedad que impulsan las causas de las mujeres, de la paridad, las cosas han venido cambiando._____

En tan sólo 12 años, pasamos de un Sistema de Cuotas a un Sistema Paritario por mandato Constitucional en la postulación de las candidaturas y el Presupuesto que deben destinar los partidos políticos a fomentar el liderazgo de las mujeres, pasó como ya se mencionó del 2 por ciento, gracias a la Reforma de 2007 y del 2008, al 3 por ciento con la Reforma ahora, que dispuso la creación del Sistema Nacional de Elecciones, la del año 2014._____

Debo decir también que el Modelo de Fiscalización en Línea ha contribuido a mejorar las prácticas administrativas de los partidos políticos y a la institucionalización de sus decisiones y procedimientos internos, pero también para visibilizar y evidenciar cuando este 3 por ciento, insisto y mandato por Ley no se satisfacía a plenitud._____

El efecto de estas disposiciones normativas, me parece que es contundente y evidente, tanto en materia de igualdad de género, como en la de rendición de cuentas de los partidos políticos._____

En la LXIV Legislatura que recién ha iniciado sus trabajos, tendremos tanto en el Senado, como en la Cámara de Diputados el mayor número de mujeres Legisladoras de nuestra historia, situación que nos coloca como el tercer país en términos de números de Legisladoras en el mundo._____

En cuanto a la rendición de cuentas, también tenemos cambios realmente significativos, si se compara la forma en que se reportaban los ingresos y Gastos de Campaña en las elecciones celebradas en los años 90, con el detalle con el que registraron sus operaciones los partidos políticos y candidatos en 2018, podemos afirmar que la democracia mexicana ha desarrollado un Sistema de Partidos Políticos que ha avanzado drásticamente en la rendición de cuentas._____

Es por ello que en el Instituto Nacional Electoral, estamos convencidos que este es un momento para consolidar los avances en materia de igualdad de género y rendición de cuentas de los partidos políticos con el Protocolo que hoy conocemos y una herramienta

para contribuir a ello, es el uso eficaz y eficiente de los recursos etiquetados para fomentar el liderazgo político de las mujeres, esto implica programar los gastos, realizar diagnósticos para definir los rubros en los que es más eficaz destinar el dinero público que reciben los partidos políticos e incorporar mejores prácticas en el ejercicio del gasto. Se trata para decirlo en una “nuez” de que la obligación de rendir cuentas sobre los recursos destinados al liderazgo político de las mujeres se convierte en un estímulo para contribuir desde el interior de los partidos políticos al fortalecimiento de una democracia paritaria, incluyente, responsable financieramente._____

Ese es el objetivo del Protocolo que hoy estamos por aprobar._____

Quiero terminar reiterando lo que señalé hace una semana, justo en el evento en el que analizamos el contenido de este Protocolo y reitero lo que dije entonces, lo repito en esta ocasión, estoy convencido que orientar a los partidos políticos en el uso correcto de los recursos públicos para el impulso del liderazgo político de mujeres mediante una adecuada planeación e instrumentación de Proyectos, implica brindar un acompañamiento a las acciones de inclusión y garantía de paridad que realizan los partidos políticos como parte del cumplimiento de las obligaciones, que el artículo 1 Constitucional mandata a todas las autoridades del Estado Mexicano._____

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala._____

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Consejero Presidente._____

También para hacerme cargo de felicitar la emisión de este Protocolo, porque creo que hay 3 grandes ventajas, la primera que estamos construyendo juntos, desde el Consejo General, con la obligación de Estado que tenemos de lo técnico, y aplicar la perspectiva de género, incluso en cuestiones tan técnicas como son la fiscalización de los recursos de los partidos políticos._____

La segunda, porque considero que efectivamente, a veces no estamos tan bien informados de lo que implica el ejercicio del gasto para construir los liderazgos, y nos dejamos guiar por prejuicios de género, con algunas ideas que no corresponden con el tema que debemos atender en una sociedad igualitaria, y creo que este propósito lo

logra muy bien el propio Protocolo al establecer precisamente cuáles han sido las prácticas, algunas verdaderamente guiadas por esos prejuicios, y otras quizá no sé si simuladas._____

Y la tercera es que nos hacemos cargo de que la intención no es sancionar a los partidos políticos, sino que la intención es construir juntos un Modelo diferente en el que los hombres y las mujeres podamos participar e interactuar en esta sociedad en condiciones de igualdad._____

Así que, agradezco mucho el trabajo que han realizado desde las áreas, coordinados, por supuesto, por el Consejero Electoral Ciro Murayama y la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, para que lleguemos a este buen puerto._____

Es cuanto, Consejero Presidente._____

Gracias._____

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala._____

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, procedamos con la votación.____

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores Consejeros Electorales se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto 19._____

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo._____

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello; no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández), Consejero Presidente._____

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG1306/2018) Ptos. 19_____

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL PROTOCOLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL GASTO PROGRAMADO: CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES

ANTECEDENTES

- I. Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, se reformó el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone, en su Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, que el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos; asimismo, es autoridad en la materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, regido por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
- II. En el citado Decreto, en su artículo 41, Base V apartado B, penúltimo párrafo, se establece que corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos relativas a los procesos electorales (federal y local), así como de las campañas de las candidaturas.
- III. El veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos Cuarto y Quinto, contienen las facultades y atribuciones de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización respectivamente, así

como las reglas para su desempeño y los límites precisos respecto de su competencia.

- IV.** En la misma fecha, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos, en la que se establece, entre otras cuestiones: i) la distribución de competencias en materia de partidos políticos; ii) los derechos y obligaciones de los partidos políticos; iii) el financiamiento de los partidos políticos; iv) el régimen financiero de los partidos políticos; y v) la fiscalización de los partidos políticos.
- V.** El seis de junio de dos mil catorce, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/CG45/2014, se aprobó el Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
- VI.** El veintiocho de enero de dos mil quince, en sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el Acuerdo INE/CG21/2015, por el que se expidió el lineamiento del gasto programado y se abrogaron los Lineamientos para la elaboración del programa anual de trabajo del gasto programado publicados el 20 de octubre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación.
- VII.** En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral celebrada el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó el Acuerdo INE/CG408/2017 por el que se establece la integración de las Comisiones Permanentes, Temporales y otros Órganos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como la creación de las Comisiones Temporales de Debates y para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la participación política en el marco del Proceso Electoral 2017-2018. En el cual se determinó que la Comisión de Fiscalización estará integrada por las Consejeras Electorales Adriana Margarita Favela Herrera y Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, así como por los Consejeros Electorales Marco Antonio Baños Martínez y Benito Nacif Hernández, presidida por el Consejero Electoral Ciro Murayama Rendón.

VIII. Que en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral celebrada el cinco de enero de dos mil dieciocho, se aprobó el Acuerdo INE/CG04/2018, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, aprobado mediante Acuerdo INE/CG263/2014, y modificado por los acuerdos INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015, INE/CG320/2016, INE/CG875/2016, INE/CG68/2017 y INE/CG409/2018.

C O N S I D E R A N D O

1. Que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, el 7 de agosto de 2012 en su recomendación 23, inciso c) de Vida y Política, sugiere al Estado parte asegurar que los partidos políticos cumplan con su obligación de asignar los fondos públicos recaudados a la promoción del liderazgo político de las mujeres. Además, en la Recomendación CEDAW/C/MEX/CO/9 de 20 de julio de 2018, cuyo numeral 34 inciso a) señala que se recomienda al Estado Mexicano adoptar medidas para atender las prácticas discriminatorias de jure y de facto que se dan dentro de los partidos políticos, y desaniman a las mujeres para participar en las elecciones ya sea a nivel federal, estatal o municipal.
2. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base I, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales.

3. Que el artículo 41, Base II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la ley garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.
4. Que los artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 29; 30, numerales 1 y 2, y 31, numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales disponen que el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autoridad en materia electoral e independiente de sus decisiones y funcionamiento. En ejercicio de su función, tiene como principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Asimismo, entre los fines del Instituto, se encuentran el contribuir al desarrollo de la vida democrática y preservar el fortalecimiento del régimen de Partidos Políticos Nacionales.
5. Que el artículo 41, Base V, Apartado B, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 2 del artículo 190 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General por conducto de la Comisión de Fiscalización.
6. Que el artículo 7, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece entre otras cosas, que es derecho de las y los ciudadanos, y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular.
7. Que de conformidad con el artículo 30, numeral 1, incisos a), b), d), f) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, son fines del Instituto Nacional Electoral, contribuir al desarrollo de la vida democrática,

preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática.

8. Que el artículo 42, numerales 2 y 6 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, prevé la creación de la Comisión de Fiscalización, la cual funcionará permanentemente y se integrará exclusivamente por Consejeros Electorales designados por el Consejo General, y contará con un Secretario Técnico que será el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización.
9. Que según el artículo 191, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales son facultades del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitir Lineamientos específicos en materia de fiscalización, contabilidad, y registro de operaciones de los partidos políticos.
10. Que el artículo 192, numeral 1, incisos h) y l) y 2, con relación al diverso 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ejercerá las facultades de modificar, aprobar o rechazar los proyectos de Dictamen Consolidados y las resoluciones emitidas con relación a los informes que los partidos políticos están obligados a presentar, para ponerlos a consideración del Consejo General en los plazos que esta Ley establece; recibir, a través de la Secretaría Técnica, los informes que deben presentar los partidos políticos para la fiscalización de sus ingresos y egresos. También se establece que, para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Fiscalización contará con la Unidad Técnica de Fiscalización.
11. Que el artículo 37, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos advierte que, en la declaración de principios, uno de los documentos básicos de los partidos políticos, debe contener la obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres.

12. Que el artículo 50, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos señala que los partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento público que se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido en el artículo 41, Base II de la Constitución, así como lo dispuesto en las constituciones locales.
13. Que el artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción V de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el 163, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Fiscalización establece que los institutos políticos tendrán derecho al financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, debiendo destinar anualmente el tres por ciento para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
14. Que el artículo 73 de la Ley General de Partidos Políticos, con relación al 163, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Fiscalización disponen que para el gasto de capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el tres por ciento del financiamiento público ordinario, en las actividades de: i) investigación y diagnósticos cuyo objeto sea identificar e informar la situación que guarda el ejercicio de los derechos de las mujeres en el ámbito político, a fin de generar indicadores que permitan el diseño e implementación de acciones y programas orientados a la disminución de brechas de desigualdad; ii) elaboración, publicación y distribución de libros, artículos y folletos, entre otros, que estén orientados a la difusión de las problemáticas, retos y avances en la participación política de las mujeres; así como a la promoción de sus derechos en el ámbito político; iii) organización y realización de mesas de trabajo, conferencias, talleres, coloquios, seminarios, o cualquier evento que permita la capacitación en temas relacionados con la situación que guarda la participación política de las mujeres; así como el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de acciones y programas orientados a dicho fin; iv) organización y realización de cursos y talleres que permitan a las mujeres desarrollar habilidades y aptitudes, así como adquirir conocimientos y herramientas que favorezcan su liderazgo y participación política; v) propaganda y publicidad relacionada con la ejecución y desarrollo de las

acciones en la materia; y vi) todo gasto necesario para la organización, desarrollo y difusión de las acciones referidas.

15. Que el artículo 70, numeral 1, incisos c) y l) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral establece que la Unidad Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación estará adscrita a la Presidencia del Consejo, y tendrá como atribuciones, proponer a las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas, y órganos desconcentrados, la implementación de políticas, programas y proyectos de no discriminación y en materia de igualdad de género, con base en la Política Institucional; así como, coordinar bajo la supervisión de la Presidencia, la relación interinstitucional en el ámbito gubernamental, social, nacional e internacional en materia de género y no discriminación por parte del Instituto, que se requiera tanto para el fortalecimiento de la institucionalización y transversalización al interior de éste, como en la coadyuvancia que en esta materia se tenga para el Estado Mexicano.
16. Que el artículo 12, numerales 1, 3 y 4 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral establece que con el objeto de fortalecer la articulación de los trabajos de las Comisiones, éstas podrán acordar la celebración de sesiones conjuntas como Comisiones Unidas y para su instalación será necesaria la presencia de al menos el Presidente y uno más de los Consejeros de cada Comisión. Además, la votación de los proyectos que deriven de las discusiones en las Comisiones Unidas, se efectuará en la Comisión que de común acuerdo se decida, dependiendo la naturaleza del asunto y la competencia del órgano colegiado que se trate.”
17. Que el artículo 165, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización señala que, en el sistema de rendición de cuentas para gasto programado, al que deberán sujetarse los partidos, se registrarán los proyectos que integran los programas y las operaciones relativas al gasto para el desarrollo de las actividades específicas y el correspondiente a la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

18. Que el artículo 170, numerales 1 y 2 del ordenamiento citado, establece que los partidos, dentro de los treinta días siguientes a la aprobación del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes por parte del Consejo General, deberán presentar un programa de gasto para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Asimismo, que los proyectos que integran los programas de gasto para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres deberán contener los elementos de acciones afirmativas, avance de las mujeres, empoderamiento de las mujeres, igualdad sustantiva, liderazgo político de las mujeres, desarrollo y promoción del liderazgo político, perspectiva de género y calidad.
19. Que el artículo 174, numeral 1, inciso b) con relación al artículo 177, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Fiscalización prevé que la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres deberá contener información, concepciones y actitudes orientadas a propiciar la igualdad de oportunidades para el desarrollo político, en el acceso al poder público y la participación en los procesos de toma de decisiones. Asimismo, procurando beneficiar al mayor número de mujeres.
20. Que el veinticuatro de diciembre de dos mil diez, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el recurso de apelación SUP-RAP-175/2010, que determina la obligación a cargo de los partidos políticos de destinar recursos para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, debiendo contemplar por una parte el destinar una determinada cantidad de dinero que anualmente variara dependiendo de la cantidad de financiamiento público que se le otorgue al cumplimiento de esta obligación, lo que traerá como consecuencia que a nivel financiero se establezca una cuenta única y exclusiva para tal obligación. Por otra parte, el partido debe demostrar mediante la documentación idónea que el dinero así destinado fue utilizado para la realización de actividades en virtud de las cuales de manera exclusiva o, por lo menos principalmente, se promoció, capacitó o desarrolló el liderazgo político de las mujeres, como pueden ser cursos, conferencias, congresos y cualquier otro tipo de actividad que cumpla con la finalidad establecida por la ley.

21. En esta sentencia, la Sala Superior refiere que la finalidad de tal obligación consiste en que los partidos destinen una determinada cantidad de recursos a la realización de actividades en virtud de las cuales de manera exclusiva, o por lo menos, principalmente se promocióne, capacite o desarrolle el liderazgo de las mujeres, por lo que es claro que la intención del legislador es que esas actividades se apliquen al mayor número de personas posibles (universalidad) sin discriminación alguna (igualdad) y con programas dirigidos a cumplir con dichos objetivos (planeación previa) a efecto de que el partido cumpla con la misma de la manera más amplia posible y con la posibilidad de evaluar los correspondientes resultados.
22. Que el trece de julio de dos mil dieciséis, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el recurso de apelación SUP-RAP-305-2016, en el cual determina que el cálculo del porcentaje que los partidos políticos deben aplicar a la promoción del liderazgo político de las mujeres será sobre el monto total de los recursos que reciban para actividades ordinarias, sin descontar las sanciones económicas (multas o reducción de la ministración) impuestas a dichos institutos políticos, toda vez que primero deben cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales, y, posteriormente, con el remanente, el resto de sus obligaciones.
23. Que la Unidad Técnica de Fiscalización ha desarrollado diferentes estudios cuantitativos y cualitativos con enfoque a los derechos humanos y perspectiva de género al ejercicio de recursos del gasto programado en el rubro de Capacitación, Promoción y el Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres, lo que ha permitido detectar áreas de oportunidad en la gestión y eficiencia de los recursos, entre las que destacan:¹
- a) Omisión de los elementos mínimos que establece el artículo 175 del Reglamento de Fiscalización.
 - b) Calidad y/o consistencia entre sus objetivos, metas e indicadores en sus proyectos.

¹ INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, *Aciertos errores y omisiones de los partidos políticos en los programas anuales de trabajo del gasto programado*, INE, Ciudad de México, 2016, página 79.

- c) Tendencia a destinar un alto porcentaje del recurso en el subrubro de capacitación y formación política, en segundo lugar, las actividades de difusión y en tercer lugar las actividades de investigación.
 - d) Los indicadores que los partidos políticos presentan en sus actas de proyecto son incompletos, inadecuados, inconsistentes con su meta o inexistentes, lo cual demuestra deficiencia en la planeación.
- 24.** En sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejero Presidente, en uso de la voz, propuso, que el Consejo General mandate a la Unidad Técnica de Fiscalización y a la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, la realización de un protocolo en donde se compile un conjunto de buenas prácticas para el seguimiento de la obligación legal de la erogación de los porcentajes derivados de la Ley General y de las Leyes Locales a la promoción política de las mujeres.
- 25.** En atención al mandato del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, sesionaron de manera conjunta en “Comisiones Unidas”, la Comisión de Fiscalización y la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y no Discriminación en la Participación Política, en la cual se aprobó el Acuerdo que establece el “Protocolo para la Implementación de Buenas Prácticas en el ejercicio de los recursos del gasto programado: Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres”.
- 26.** El siete de septiembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la presentación por parte de las y los Consejeros integrantes de la “Comisiones Unidas”, del “Protocolo para la Implementación de Buenas Prácticas en el ejercicio de los recursos del gasto programado: Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres” ante partidos políticos, senadoras y diputadas electas de la LXIV Legislatura, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas.

Así, el presente protocolo tiene por objeto establecer criterios de orientación y pautas de actuación a los Partidos Políticos Nacionales y locales, a fin de cumplir eficientemente con el propósito establecido respecto al ejercicio de los recursos para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo previsto en los artículos 41, Bases I, segundo párrafo; II y V, apartados A y B, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, numeral 1; 29, 30, numeral 1, incisos a), b), d), f) y g) y 2; 31, numeral 1; 42, numerales 2 y 6; 190, numeral 2; 191, numeral 1, inciso a); 192, numeral 1, incisos h) y l) y 2, y 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 70, numeral 1, incisos c) y l) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; 12, numeral 1, 3 y 4 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral; 37, numeral 1, inciso e); 50, numeral 1; 51, numeral 1, inciso a), fracción V; 73 de la Ley General de Partidos Políticos; 163, numeral 1, inciso b); 165, numeral 1; 170, numerales 1 y 2; 174, numeral 1, inciso b) y 177, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Fiscalización, se ha determinado emitir el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. Se aprueba el **PROTOCOLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL GASTO PROGRAMADO: CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES**, identificado en el Anexo Único.

SEGUNDO. El presente protocolo entrará en vigor una vez que sea aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

TERCERO. Lo no previsto en el protocolo será resuelto por la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que notifique el presente Acuerdo y su anexo a los Partidos Políticos Nacionales, y en el portal de internet del Instituto Nacional Electoral.

QUINTO. Remítase el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de Vinculación, a efecto de que sea notificado a los Organismos Públicos Locales y éstos a su vez, lo hagan de conocimiento a los partidos políticos con acreditación y registro local en las entidades federativas.

Contenido

PRESENTACIÓN	3
I. INTRODUCCIÓN	5
II. OBJETIVO.....	7
III. MARCO NORMATIVO	7
IV. MARCO CONCEPTUAL	19
V. PLANEACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) PARA LA CPDLPM ..	24
1. JUSTIFICACIÓN	26
2. OBJETIVO.....	27
3. META.....	28
4. INDICADOR	29
5. PRESUPUESTO	34
6. CRONOGRAMA.....	35
7. PERSONAS RESPONSABLES	35
VI. APLICACIÓN DEL RECURSO EN LOS SUBRUBROS DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES	37
1. CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES..	37
A. PLANEACIÓN	38
B. EJECUCIÓN	40
2. INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS, DIAGNÓSTICOS Y ESTUDIOS COMPARADOS.....	41
A. PLANEACIÓN	42
B. EJECUCIÓN	44
3. DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN.....	45
A. PLANEACIÓN	45
B. EJECUCIÓN	46
VII. COMPROBACIÓN DEL GASTO DEL PAT DE CPDLPM	47
VIII. PROBLEMÁTICAS Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL GASTO PROGRAMADO	51
1. PROBLEMÁTICAS DETECTADAS EN EL EJERCICIO DEL GASTO	51
A. EN LA PLANEACIÓN Y DISEÑO DE LOS PROGRAMAS ANUALES DE TRABAJO	51
B. EN LA EJECUCIÓN Y EJERCICIO DEL GASTO	52
2. BUENAS PRÁCTICAS PARA OPTIMIZAR LOS RECURSOS DEL GASTO PROGRAMADO	54

A.	EN LA PLANEACIÓN Y DISEÑO DE LOS PROGRAMAS ANUALES DE TRABAJO	54
B.	EN EL SUBRUBRO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES	56
C.	EN EL SUBRUBRO DE INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS, DIAGNÓSTICOS Y ESTUDIOS COMPARADOS	58
D.	EN EL SUBRUBRO DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN	61
3	BUENAS PRÁCTICAS REALIZADAS EN OTROS PAÍSES EN MATERIA DE DIFUSIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA FORTALECER EL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES	70
	LISTA DE ACRÓNIMOS	84
	ANEXO 1	85

PRESENTACIÓN

Para comprender mejor la conveniencia de establecer un protocolo que oriente a los partidos políticos sobre la forma de ejercer el 3% de su presupuesto en la promoción del liderazgo político de las mujeres, es necesario recordar un poco de historia.

Una parte de los problemas que hemos enfrentado en materia de paridad de género deriva de las prácticas de simulación que se daban al interior de los partidos políticos, tales como: simular gastar dinero en la capacitación de las mujeres; incluirlas en la toma de decisiones otorgándoles cargos de poca importancia, postulándolas como candidatas en elecciones perdidas de antemano, y obligándolas a renunciar para que quedaran hombres en su lugar (como sucedió con el famoso caso de “las juanitas”, con las diputadas federales en 2011 y las regidoras y diputadas plurinominales en el estado de Chiapas en 2018).

Pero las cosas han cambiado, porque esas prácticas de simulación evidenciaron la necesidad de establecer disposiciones obligatorias, sin válvulas de escape, para que los partidos políticos impulsen y fortalezcan de manera auténtica el liderazgo político de las mujeres.

En 12 años pasamos del sistema de cuotas a un sistema paritario por mandato constitucional y el porcentaje de presupuesto que deben destinar los partidos políticos a fomentar el liderazgo de las mujeres pasó de 2% con la reforma de 2007-2008, al 3% con la reforma que dispuso la creación del sistema nacional de elecciones en 2014. El efecto de dichas disposiciones es contundente. Se ha garantizado la capacitación de las mujeres, para promover sus liderazgos políticos e inclusión en puesto de toma de decisión. Con las elecciones del 1º de julio de 2018, en la LXIV Legislatura se tendrá, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, el mayor porcentaje de mujeres legisladoras en la historia de México.

Es por ello, que en el Instituto Nacional Electoral (INE) estamos convencidos que éste es un momento para consolidar los avances en materia de paridad de género. Y una herramienta para ello, es que los recursos etiquetados para fomentar el liderazgo político de las mujeres se ejerzan con eficiencia, como está programado. De ahí que en el presente Protocolo se detallan los procesos de actuación técnica para la planeación, ejecución y comprobación de los recursos del Gasto Programado bajo el rubro de la Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (CPDLPM). Esto con la intención de que este protocolo sea una herramienta orientativa para que los partidos políticos a nivel nacional y local administren con eficiencia los recursos del rubro de CPDLPM cumpliendo con los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad; así como los de universalidad, no discriminación y planeación previa establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.¹

En el INE consideramos que orientar a los partidos políticos en el ejercicio eficiente de los recursos públicos que les fueron entregados para impulsar y fomentar el liderazgo político de las mujeres, mediante una adecuada planeación e implementación de proyectos, implica un acompañamiento de la autoridad electoral como parte del cumplimiento de las obligaciones que el artículo primero constitucional impone a las autoridades del Estado Mexicano.

El correcto ejercicio de los recursos públicos destinados a la CPDLPM es una vía para garantizar el acceso de las mujeres al espacio público y al ejercicio de sus derechos político-electorales en condiciones de igualdad. Con las reformas de 2007-2008 y la de 2014, México es uno de los pocos países en el mundo y de América Latina que cuentan con un recurso específico para el empoderamiento político de las mujeres. De ahí que el presente documento pretenda ser una herramienta para que los partidos políticos ejerzan de manera más eficaz y eficiente el Gasto Programado.

Una sociedad democrática exige la inclusión de las mujeres y hombres en igualdad de condiciones. El correcto ejercicio de este recurso público es fundamental para alcanzar una democracia en donde mujeres y hombres sean representados paritariamente.

Dr. Lorenzo Córdova Vianello
Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral

¹SUP-RAP-175/2010 resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

I. INTRODUCCIÓN

Uno de los retos de las democracias occidentales contemporáneas es lograr un esquema de financiamiento de partidos y elecciones que promueva los valores básicos de la democracia como lo es, la igualdad.²

El Instituto Nacional Electoral (INE) es un organismo público autónomo que promueve el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos relativos al ámbito político-electoral; esto en cumplimiento al mandato del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El INE, a través de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación (UTIGyND) fortalece la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género, promoviendo acciones que prevengan toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra situación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto (o resultado) anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.³

Conforme a lo anterior y derivado de que tradicionalmente las mujeres, independientemente de la condición social a la que pertenezcan, han sido limitadas y las han hecho invisibles en el ejercicio de sus derechos político-electorales en condiciones de igualdad de género. Por tal motivo, las organizaciones de la sociedad civil y una diversidad de mujeres y hombres en los partidos políticos impulsaron que, en la Reforma Electoral de 2007-2008 se estableciera como obligación legal que los partidos políticos destinaran un porcentaje de su financiamiento público ordinario para “promocionar, capacitar y desarrollar el liderazgo político de las mujeres”, con el fin de reducir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, durante su participación política.⁴

²Daniel Zovatto y Steven Grinner, *De las normas a las buenas prácticas. El desafío del financiamiento político en América Latina*, p. 22 consultado el 27-07-17 en <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1593/4.pdf>

³Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1, último párrafo.

⁴Sólo 12 países en el mundo destinan un parte del financiamiento público para actividades específicas para la igualdad de género en los partidos políticos (hasta 15% del financiamiento público): Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Finlandia, Honduras, Irlanda, Italia, Kenia, México, Panamá, y la República de Korea. IDEA Internacional, *Gender inequality in the political process remains an important problem in all countries* Magnus Ohman, 2018.

En México, los partidos políticos tienen derecho al financiamiento público para sus actividades, estructura, sueldos y salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas por la Ley General de Partidos Políticos.

En el periodo comprendido entre 2008 y 2014, los partidos políticos nacionales tuvieron la obligación de destinar anualmente, un mínimo de 2%(dos por ciento) del financiamiento para actividades ordinarias permanentes, para las actividades del rubro de CPDLPM, y fue a partir de la Reforma Política Electoral de 2014, que se incrementó un punto porcentual, para quedar en un mínimo de 3% (tres por ciento), constituyendo así, el monto mínimo de recursos que los institutos políticos están obligados a destinar para ese efecto. Además, se rediseñó el régimen electoral mexicano, transformando al Instituto Federal Electoral, en una autoridad de carácter nacional (Instituto Nacional Electoral), estableciendo la obligación de fiscalizar a los partidos políticos nacionales con acreditación en las entidades federativas y a los partidos políticos locales, en función a los porcentajes que su normativa determine.⁵

Parte importante de la tarea que realiza el INE, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), es el establecimiento de mecanismos para que la autoridad pueda fiscalizar el origen y aplicación de los ingresos y egresos de los partidos políticos que participan en las elecciones federales o locales. Para el caso del gasto que se destina para el fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres, la revisión y fiscalización de dichos recursos es crucial para el objetivo de la consolidación de una democracia incluyente y paritaria.

El presente documento es producto del mandato del Consejo General del INE, en su sesión del 22 de noviembre de 2017, en donde instruye a la UTF y a la UTIGyND a elaborar un Protocolo que brinde orientación y buenas prácticas para el adecuado ejercicio del 3%(tres por ciento) anual para las actividades de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

Para cumplir con dicho objetivo, el presente documento cuenta con la siguiente estructura:

- En primer lugar, se aborda el marco normativo de origen nacional e internacional, así como las resoluciones jurisdiccionales que obligan a los partidos políticos a promover y garantizar la igualdad y la no discriminación por razones de sexo o género.

⁵ Los porcentajes mínimos que los partidos políticos en las entidades federativas deben destinar a los rubros del Gasto Programado se determinan de acuerdo a su normatividad, tal como se detalla en el ANEXO 1.

- En segundo lugar, se exponen los conceptos básicos que se requieren considerar para dirigir adecuadamente las metas para el ejercicio del 3% (tres por ciento) de su financiamiento, se desarrollan los elementos básicos de la planeación y elaboración del Programa Anual de Trabajo (PAT) para el liderazgo político de las mujeres por parte de los partidos políticos, y se abordan los tres subrubros de gasto aplicables, los cuales son 1) *capacitación y formación para el liderazgo político*; 2) *investigación, análisis, diagnósticos y estudios comparados*, y 3) *divulgación y difusión*.
- En tercer lugar, derivado de los dictámenes de fiscalización realizados por la UTF, así como los análisis de los Programas Anuales de Trabajo de los ejercicios 2016 y 2017 y, el estudio comparado de buenas prácticas a nivel nacional e internacional, se presentan las recomendaciones y buenas prácticas que los partidos políticos en México podrían adoptar con el fin de hacer un uso eficiente, eficaz y efectivo de los recursos destinados al rubro del Gasto Programado.

La expectativa del presente protocolo es que sea una herramienta que potencialice el uso adecuado de este recurso por parte de los partidos políticos, que contribuya a impulsar una mayor presencia de mujeres en los puestos de elección popular y una representación paritaria en los órganos de decisión en México.

Para ello, se implementarán medidas de capacitación sobre el contenido del mismo.

II. OBJETIVO

Establecer criterios de orientación y pautas de actuación para los partidos políticos nacionales y locales, a fin de que cumplan eficientemente con el propósito del ejercicio de los recursos para la CPDLP.

III. MARCO NORMATIVO

A continuación, se presenta la normativa, de origen internacional y nacional, que debe ser considerada para el correcto ejercicio del Gasto Programado enfocado a la CPDLP por parte de los partidos políticos nacionales y locales en México:

NORMATIVA	FUNDAMENTO
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
	<p>Art. 1, párrafo 5 Todas las personas gozarán de los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.</p> <p>Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.</p>
	<p>Artículo 4 El varón y la mujer son iguales ante la ley.</p>
	<p>Artículo 41, Base I, párrafo 2 Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales.</p>
TRATADOS INTERNACIONALES	
Convención Americana sobre Derechos Humanos	<p>Artículo 24 Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.</p>
	<p>Artículo 32, párrafo 2 Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática.</p>
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer	<p>Artículo I Las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.</p>
	<p>Artículo II Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna.</p>
	<p>Artículo III Las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.</p>

NORMATIVA	FUNDAMENTO
<p>Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convención de Belém Do Pará"</p>	<p>Artículo 1 Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.</p> <p>Artículo 3 Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.</p> <p>Artículo 6 El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: a. El derecho a ser libre de toda forma de discriminación, y b. El derecho a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.</p>
<p>Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer "CEDAW"</p>	<p>Artículo 1 A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.</p> <p>Artículo 7 Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: a. Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; b. Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; c. Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.</p>
<p>Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT</p>	<p>Artículo 2 1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.</p>

NORMATIVA	FUNDAMENTO
	<p>2. Esta acción deberá incluir medidas que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;</p> <p>Artículo 3</p> <p>1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.</p> <p>2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio.</p> <p>Artículo 5</p> <p>Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:</p> <p>...</p> <p>c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo.</p> <p>Artículo 6</p> <p>1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:</p> <p>...</p> <p>b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;</p> <p>c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.</p> <p>Artículo 22</p> <p>1. Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de miembros de los pueblos interesados en programas de formación profesional de aplicación general.</p> <p>2. Cuando los programas de formación profesional de aplicación general existentes no respondan a las necesidades especiales de los pueblos interesados, los gobiernos deberán asegurar, con la participación de dichos pueblos, que se pongan a su disposición programas y medios especiales de formación.</p>

NORMATIVA	FUNDAMENTO
	<p>Artículo 26 Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional.</p>
Leyes Federales	
<p>Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE)</p>	<p>Artículo 7 Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los Ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular.</p>
<p>Ley General de Partidos Políticos (LGPP)</p>	<p>Artículo 3, numeral 1 Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso a estos al ejercicio del poder público.</p> <p>Artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción V Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el tres por ciento del financiamiento público ordinario.</p> <p>Artículo 73 Los partidos políticos podrán aplicar los recursos destinados para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, en los rubros siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> La realización de investigaciones que tengan como finalidad informar a la ciudadanía de la evolución, desarrollo, avances, y cualquier tema de interés relacionado con el liderazgo político de la mujer; La elaboración, publicación y distribución de libros, revistas, folletos o cualquier forma de difusión de temas de interés relacionados con la paridad de género; La organización de mesas de trabajo, conferencias, talleres, eventos y proyecciones que permitan difundir temas relacionados con el desarrollo de la mujer en su incorporación a la vida política; La realización de propaganda y publicidad relacionada con la ejecución y desarrollo de las acciones en la materia, y Todo gasto necesario para la organización y difusión de las acciones referidas.

NORMATIVA	FUNDAMENTO
<p>Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)</p>	<p>Artículo 4 Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales son:</p> <ul style="list-style-type: none"> I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres; III. La no discriminación, y IV. La libertad de las mujeres.
<p>Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres</p>	<p>Artículo 1 La Ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo.</p> <p>Artículo 3 Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, las mujeres y los hombres que se encuentren en territorio nacional, que, por razón de su sexo, independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud, religión, opinión o capacidades diferentes, se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que esta Ley tutela</p>
Reglamentos	
<p>Reglamento de Fiscalización (RF)</p>	<p>Título V. Del Gasto Programado Los partidos políticos deberán considerar lo señalado en los artículos 163 al 189, del presente título, se destaca:</p> <p>Artículo 163, numeral 1, inciso b) Para el gasto de capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el tres por ciento del financiamiento público ordinario.</p> <p>Artículo 163, numeral 4 Todos los gastos realizados para el desarrollo de las actividades referidas en este artículo deberán ser pagados en el ejercicio fiscal correspondiente.</p> <p>Artículo 170, numerales 1 y 2 Los partidos, dentro de los treinta días siguientes a la aprobación del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes por parte del Consejo General, deberán presentar un programa de gasto para el desarrollo de las actividades específicas y otro para el gasto correspondiente a la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.</p>

NORMATIVA	FUNDAMENTO
	<p>Los proyectos que integran los programas de gasto para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres deberán retomar los elementos siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Acciones afirmativas b) Avance de las mujeres c) Empoderamiento de las mujeres d) Igualdad sustantiva e) Liderazgo político de las mujeres f) Desarrollo del liderazgo político g) Promoción del liderazgo político h) Perspectiva de género i) Calidad <p>Artículo 174, numeral 1, inciso b)</p> <p>Los programas deberán considerar lo siguiente. Para el caso de:</p> <ul style="list-style-type: none"> b) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres deberán contener información, concepciones y actitudes orientadas a propiciar la igualdad de oportunidades para el desarrollo político, en el acceso al poder público y la participación en los procesos de toma de decisiones. Asimismo, procurando beneficiar al mayor número de mujeres. <p>Artículo 178, numeral, 3</p> <p>En el Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto programado, se revisará el cumplimiento informado por los partidos políticos de los proyectos que integran los programas y las operaciones relativas al gasto para el desarrollo de las actividades específicas y el correspondiente a la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. El informe que presenten los partidos sobre el gasto programado contemplará la perspectiva de género y los criterios de eficacia, eficiencia y calidad.</p> <p>Artículo 180</p> <p>La Unidad Técnica realizará seguimiento y evaluaciones del informe anual relativo a la consistencia y resultados, es decir el desempeño global del programa y los proyectos respectivos, considerando los criterios de eficacia, eficiencia y calidad, mismos que podrán realizarse con perspectiva de género.</p> <p>Artículo 181, numeral, 1</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Las evaluaciones que realice la Unidad Técnica contendrán como mínimo, los elementos siguientes: <ul style="list-style-type: none"> a) Nombre, objetivos, estrategias y metas del programa. b) Presupuesto.

NORMATIVA	FUNDAMENTO
	<p>c) Resultados e impacto de los proyectos obtenidos durante el ejercicio sujeto de revisión y cumplimiento de las metas. En su caso, señalar el impacto alcanzado como resultado de los proyectos programados en varios periodos.</p> <p>d) Recomendaciones para incrementar el impacto del gasto programado en mejores condiciones para garantizar el derecho de las mujeres a la participación política en condiciones de igualdad de género.</p> <p>e) En su caso, desagregar la información por sexo y edad.</p>
Jurisprudencias y resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación	
<p>Jurisprudencia 11/2015, publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral del TEPJF, Año 8, Número 16, 2015, páginas 13, 14 y 15.</p>	<p>ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES</p> <p>Se colige la obligación del Estado mexicano de establecer acciones afirmativas en tanto constituyen medidas temporales, razonables, proporcionales y objetivas orientadas a la igualdad material. En consecuencia, los elementos fundamentales de las acciones afirmativas son: a) Objeto y fin. Hacer realidad la igualdad material y, por tanto, compensar o remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación; alcanzar una representación o un nivel de participación equilibrada, así como establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades. b) Destinatarias. Personas y grupos en situación de vulnerabilidad, desventaja y/o discriminación para gozar y ejercer efectivamente sus derechos, y c) Conducta exigible. Abarca una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria. La elección de una acción dependerá del contexto en que se aplique y del objetivo a lograr. La figura más conocida de las acciones afirmativas son las políticas de cuotas o cupos.</p>
<p>Jurisprudencia 3/2015, publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral del TEPJF, Año 8, Número 16, 2015, páginas 12 y 13.</p>	<p>ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS MUJERES. NO SON DISCRIMINATORIAS</p> <p>De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1º, párrafo quinto, 4º, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo primero, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 1, 2, 4 y 5, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 1, 2, 3, párrafo primero y 5, fracción I, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sustentados en la Opinión Consultiva OC-4/84, y al resolver los Casos Castañeda Gutman Vs. México, y De las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana; se advierte que las acciones afirmativas son medidas especiales de carácter temporal que se adoptan para generar igualdad y no se considerarán discriminatorias siempre que sean razonables, proporcionales y objetivas, y una vez alcanzado el fin para el cual fueron implementadas cesarán. Es por ello que las medidas</p>

NORMATIVA	FUNDAMENTO
	<p>temporales a favor de las mujeres, encaminadas a promover la igualdad con los hombres, no son discriminatorias, ya que al establecer un trato diferenciado entre géneros con el objeto de revertir la desigualdad existente, compensan los derechos del grupo de población en desventaja, al limitar los del aventajado.</p>
<p>Jurisprudencia 30/2014, publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral del TEPJF, Año 7, Número 15, 2014, páginas 11 y 12.</p>	<p>ACCIONES AFIRMATIVAS. NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO DE SU IMPLEMENTACIÓN</p> <p>Se advierte que las acciones afirmativas constituyen una medida compensatoria para situaciones en desventaja, que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos, y con ello, garantizarles un plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que disponen la mayoría de los sectores sociales. Este tipo de acciones se caracteriza por ser: temporal, porque constituyen un medio cuya duración se encuentra condicionada al fin que se proponen; proporcional, al exigírseles un equilibrio entre las medidas que se implementan con la acción y los resultados por conseguir, y sin que se produzca una mayor desigualdad a la que pretende eliminar; así como razonables y objetivas, ya que deben responder al interés de la colectividad a partir de una situación de injusticia para un sector determinado.</p>
<p>Tesis XXI/2018 aprobada en sesión pública del 27 de junio de 2018 por la Sala Superior del TEPJF</p>	<p>GASTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Y ESPECÍFICAS. LOS PARTIDOS POLÍTICOS TIENEN LA OBLIGACIÓN DE REINTEGRAR AL ERARIO EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO NO COMPROBADO O NO DEVENGADO</p> <p>Los partidos políticos, como entidades de interés público, tienen la obligación de ejercer el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines y ejercicio que fueron entregados. En ese sentido, aun cuando no exista alguna norma que lo ordene expresamente, de conformidad con los principios constitucionales, hacendarios y presupuestales de racionalidad, austeridad y anualidad que deben prevalecer en las finanzas del país, los partidos políticos tienen el deber de reintegrar al erario los recursos entregados para el desarrollo de actividades ordinarias y específicas que no fueron debidamente comprobados o devengados en cada ejercicio anual.</p>
<p>SUP-RAP-175/2010</p>	<p>El cumplimiento de la obligación de los partidos de destinar parte de su financiamiento público para actividades ordinarias, en el rubro de CPDLP, deberá dirigirse a la realización de actividades que de manera exclusiva, o por lo menos principalmente, sirvan para promover, capacitar o desarrollar el liderazgo político de las mujeres, además de proporcionar y/o desarrollar información, concepciones y actitudes orientadas a propiciar la igualdad de oportunidades para el desarrollo político, en el acceso al poder público y la participación en los procesos de toma de decisiones.</p>

NORMATIVA	FUNDAMENTO
	<p>Los principios que deberán observarse al aplicar los recursos destinados a este rubro son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Universalidad. Las actividades deberán aplicarse al mayor número de personas posibles. 2. Igualdad. Las actividades se desarrollarán sin discriminación alguna. 3. Planeación previa. Las actividades deberán estar contenidas en programas dirigidos a cumplir con objetivos, metas e indicadores, a efecto de que el partido cumpla con el objetivo del gasto programado de la manera más amplia posible y que existan los elementos necesarios para evaluar los correspondientes resultados. <p>La obligación de los partidos políticos de destinar recursos para la CPDLPM implica:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Determinar anualmente una cantidad de dinero en función del financiamiento público que se le otorgue, así como la creación de una cuenta contable única y exclusiva para el manejo de los recursos. 2. Demostrar con el registro contable y documentación soporte idónea, que los recursos fueron aplicados en proyectos y actividades alineados a los objetivos del gasto programado. para el cumplimiento de esta obligación.
<p>SUP-JRC-740/2015</p>	<p>La Sala Superior consideró que los partidos políticos como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática, así como en la contribución a la integración de los órganos de representación política, tienen la obligación de determinar y hacer públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales.</p> <p>Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros. Para lograr lo anterior, los partidos políticos tienen asignado un presupuesto mínimo del cual pueden disponer para realizar las actividades de CPDLPM. Tal asignación presupuestaria la previó el legislador con el carácter de obligatoria para que los partidos políticos generaran cuadros de mujeres líderes, con capacidades y competencias de un alto perfil para hacer posible el acceso de las mujeres al ejercicio del poder público. De modo que la obligación de destinar el 2% (actualmente 3%) del financiamiento público ordinario para la CPDLPM, tiene que ser cumplida por los partidos políticos sin que puedan suprimir dicho deber mediante argumentos de tipo administrativo o financiero para evadir tal obligación. Por lo que concluyó que las autoridades electorales no pueden pasar por alto que los institutos políticos incumplan con esa obligación de destinar como mínimo el 2% del financiamiento público ordinario para tales actividades específicas y menos, a través de argumentos de tipo logístico administrativo en la aplicación de los recursos.</p>

NORMATIVA	FUNDAMENTO
	En ese sentido confirmó tanto la multa impuesta al partido en cuestión como su obligación de reintegrar el financiamiento público no ejercido relacionado con la CPDLPM.
SUP-RAP-305-2016	El cálculo del porcentaje que los partidos políticos deben aplicar a la promoción del liderazgo político de las mujeres será sobre el monto total de los recursos que reciban para actividades ordinarias, sin descontar las sanciones económicas (multas o reducción de la ministración) impuestas a dichos institutos políticos, toda vez que primero deben cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales, y, posteriormente, con el remanente, el resto de sus obligaciones.
SUP-RAP-758/2017	La Sala Superior resolvió respecto de la obligación de los partidos políticos de regresar el financiamiento público que no fue devengado, así como a la facultad implícita del Instituto Nacional Electoral para ordenar la devolución respectiva. Lo anterior, ya que la obligación de reintegrar los recursos no ejercidos o no comprobados debidamente del financiamiento público, deriva del deber de aplicarlos sólo para los fines y durante el ejercicio en que les que fueron entregados para actividades ordinarias y específicas que deben desarrollar dentro del año calendario en que les fue ministrado el recurso correspondiente, en cumplimiento a los principios de austeridad, racionalidad y ejercicio anual del presupuesto.
SUP-RAP-759/2017	<p>La Sala Superior advirtió que la finalidad fundamental de la imposición de sanciones es inhibir las conductas antijurídicas, de manera que la interpretación de las disposiciones que regulan la individualización de sanciones debe ser en el sentido de que es perfectamente válido determinarlas en un monto superior al involucrado para cumplir con esa finalidad. En el caso, el impugnante omitió destinar el 3% del financiamiento público ordinario de 2016 para la CPDLPM y el Consejo General del INE determinó que la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivalente al 150% sobre el monto involucrado.</p> <p>El órgano jurisdiccional desestimó lo alegado por el recurrente respecto a la sanción que se le impuso por mantener saldos en cuentas por pagar por una antigüedad mayor a un año, pues su prohibición y el correspondiente tipo sancionador, tiene la finalidad de evitar que dichos recursos se mantengan en la esfera partidista año con año, indefinidamente, como un verdadero ingreso adicional para los partidos o como mínimo una ventaja de manejo de reserva de recursos, salvo que se informe en su oportunidad de la existencia de alguna excepción legal para mantener dichos saldos.</p> <p>También adujo que el tipo administrativo electoral que sanciona a los partidos políticos por la existencia de saldos en cuentas por pagar con una antigüedad mayor a un año, tiene una finalidad distinta y protege un bien jurídicamente diverso a los que se tutelan en el ámbito tributario.</p>

NORMATIVA	FUNDAMENTO
	<p>Asimismo, la Sala Superior desestimó los planteamientos del actor al pretender excluirse de responsabilidad bajo el argumento de que se trató de impuestos que ya había pagado, porque fue un planteamiento dogmático y genérico. En cuanto a la vigencia de la Unidad de Medida de Actualización para efectos de imposición de sanciones, la Sala Superior consideró que hubo sanciones que se fijaron concretamente con los montos involucrados y solamente para efectos ilustrativos, las cantidades se tradujeron a Unidad de Medida, más no fue determinante para fijar el monto establecido.</p> <p>La Sala Superior consideró que le asistió la razón al partido recurrente en el planteamiento referente a que la individualización de las sanciones fue incorrecta porque la responsable las determinó con base al valor de la UMA vigente al momento de la resolución en 2017, cuando debió fijarlas conforme al valor de la UMA vigente en la fecha en que se cometió la infracción, en 2016, respecto a las conclusiones 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, y 35 del dictamen que se impugnó, la integración actual de la Sala Superior, ha sostenido el criterio de que el valor de la Unidad de Medida impuesto como sanción debe ser el vigente al momento de la comisión de la infracción, y no el que tiene esa Unidad de Medida al momento de emitirse la resolución sancionadora, de esa manera se otorga una mayor seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, pues se parte de un valor predeterminado precisamente por la época de comisión del ilícito, y no del que podría variar según la fecha en que se resolviera el procedimiento sancionador correspondiente, en atención a razones de diversa índole, como pudieran ser inflacionarias.</p>
Acuerdos del Consejo General	
<p>Acuerdo INE/CG21/2015, aprobado en sesión ordinaria del 28 de enero de 2015 por el CG del INE</p>	<p>En los Lineamientos para el Gasto Programado se señalan los elementos que orientan a los partidos políticos para la elaboración de los objetivos, metas e indicadores de los Programas Anuales de Trabajo (PAT) del Gasto Programado.</p>
<p>Acuerdo INE/CG459/2018, aprobado en sesión extraordinaria del 11 de mayo de 2018 por el CG del INE</p>	<p>Los Lineamientos para determinar el remanente no ejercido o no comprobado del financiamiento público otorgado a los Partidos Políticos Nacionales y locales para el desarrollo de actividades ordinarias y específicas, el procedimiento para reintegrarlo; tienen por objeto establecer el procedimiento para el cálculo, determinación, plazos y formas para el reintegro al Instituto Nacional Electoral y/o a los Organismos Públicos Locales, de los recursos del financiamiento público otorgado para gastos de operación ordinaria y actividades específicas, no devengados o no comprobados a la conclusión del ejercicio sujeto de revisión.</p>
<p>Protocolo para la Atención de la Violencia Política</p>	<p>Ante la falta de una ley específica en México y tomando en cuenta las obligaciones constitucionales y convencionales de las autoridades mexicanas para hacer realidad los derechos políticos de las mujeres, a</p>

NORMATIVA	FUNDAMENTO
contra las Mujeres en Razón de Género	<p>iniciativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en conjunto con el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Subsecretaría-DDHH), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), se consideró necesario emitir un protocolo que estableciera las acciones urgentes frente a casos de violencia política contra las mujeres, con el fin de prevenir y evitar daños mayores a las víctimas, sus familias y personas cercanas.</p> <p>El Protocolo contribuye a identificar la violencia política contra las mujeres; informar quiénes y cómo se pueden presentar los trámites de denuncias, quejas, querellas y demandas; evitar daños mayores a las mujeres víctimas de violencia, a sus familias y personas cercanas; servir de guía para atender la violencia política en el nivel federal, estatal y municipal; generar una adecuada coordinación entre las instituciones responsables de hacer frente a casos de violencia política contra las mujeres, a fin de evitar que sus derechos político-electorales se vean afectados por la violencia.</p>

IV. MARCO CONCEPTUAL

Para asegurar una adecuada planeación y ejecución de los recursos que se destinen a laCPDLPM, es primordial que los partidos políticos nacionales y locales conozcan el significado de los conceptos desarrollados por las diversas teorías de género, con el fin de contar con elementos para identificar las causas de la desigualdad por razones de género y proponer programas y actividades que abonen a su reducción y eliminación, poniendo en el centro de la acción al empoderamiento de las mujeres.

Acciones afirmativas: Medidas temporales cuyo fin es acelerar la participación en condiciones de igualdad de la mujer en el ámbito político, económico, social, cultural y civil, o en cualquier otro ámbito. El Comité para la eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la CEDAW en su “Recomendación General 25”, considera que la aplicación de estas medidas no es una excepción a la regla de no discriminación, sino parte de una estrategia necesaria para lograr la igualdad sustantiva de la mujer y el hombre en el goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales.⁶

⁶ Artículo 170 del Reglamento de Fiscalización aprobado mediante acuerdo INE/CG263/2014 en Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el 19 de noviembre de 2014 y modificado mediante acuerdos INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015, INE/CG320/2016, INE/CG875/2016, INE/CG68/2017, INE/CG409/2017 e INE/CG04/2018.

Análisis con perspectiva de género. Es una categoría de análisis que⁷:

- Permite visibilizar la asignación social diferenciada de roles y tareas en virtud del sexo, género o preferencia/orientación sexual;
- Revela las diferencias en oportunidades y derechos que siguen a esta asignación;
- Evidencia las relaciones de poder originadas en estas diferencias;
- Se hace cargo de la vinculación que existe entre las cuestiones de género, la raza, la religión, la edad, las creencias políticas, etc.;
- Pregunta por los impactos diferenciados de las leyes y políticas públicas basadas en estas asignaciones, diferencias y relaciones de poder, y
- Determina en qué casos un trato diferenciado es arbitrario y en qué casos necesario.

Avance político de las mujeres: Se entenderá como la disminución de las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres a fin de garantizar el pleno reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos político-electorales con base en la igualdad sustantiva para garantizar su participación política.⁸

Brechas de género: Medida estadística que muestra la distancia entre mujeres y hombres respecto a un mismo indicador que revele sus condiciones sociales, económicas, culturales, políticas o el acceso a derechos. Se utiliza para reflejar la magnitud en la disparidad existente entre los sexos respecto a las oportunidades de acceso y control de los recursos económicos, sociales, culturales y políticos.⁹

Condición/posición de género: Expresa los factores y mecanismos sociales, económicos y culturales que mantienen a las mujeres en una situación de poder desventajosa y subordinada en relación con los hombres. La forma en que se expresa esta subordinación varía según el contexto histórico y cultural.¹⁰

Desarrollo del liderazgo político: Se debe entender la evolución progresiva de la condición de las mujeres para potenciar su influencia política en los espacios de toma de decisión.¹¹

⁷<https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/protocolo-para-juzgar-con-perspectiva-de-g%C3%A9nero-haciendo-realidad-el-derecho-la-igualdad>

⁸ Artículo 170 del Reglamento de Fiscalización, Op. Cit.

⁹ Diagnóstico de brechas de desigualdad de género del Sector Social, Instituto Nacional de las Mujeres y Gobierno del Estado de Durango. México 2012. <http://cedoc.inmujeres.gob.mx/ftp/Durango/dgmeta3.pdf>

¹⁰ Diagnóstico de la condición y posición de género de las mujeres de Jalpa de Méndez, México, 2011.

¹¹ Artículo 170 del Reglamento de Fiscalización, Op. Cit.

Difusión: Actividades que se llevan a cabo con la finalidad de transmitir y divulgar contenidos sobre igualdad y no discriminación, sea normatividad, reglamentación, contenidos del enfoque de igualdad y no discriminación, que promuevan o reflexionen sobre el avance político de las mujeres.

Empoderamiento de las mujeres: Es un proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estadio de conciencia, autodeterminación, autonomía e independencia el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades.¹²

Estereotipos de género: Creencias de origen y desarrollo socio-histórico, relativas a lo que un sector de la sociedad considera como normal y típico en las mujeres y en los hombres. Son categorías mentales muy simplificadas que se establecen en función de la dicotomía sexual que refleja las creencias populares sobre los rasgos físicos, las actividades y los roles que caracterizan a hombres y mujeres con base en mandatos de género que tienen como característica inherente, la desigualdad.¹³

Formación y capacitación política: Proceso a través del cual se busca identificar, asegurar y desarrollar los conocimientos (teóricos y prácticos), habilidades, aptitudes y competencias que las y los actores institucionales y políticos requieren para cumplir con la obligación de garantizar la participación política efectiva de las mujeres en un contexto social determinado.

Género: Categoría analítica a través de la cual se evidencian los roles, comportamientos, actividades, y atributos que una sociedad determinada en una época determinada considera como apropiados o propios para los hombres y para las mujeres. El género determina qué se espera, qué se permite y qué se valora en una mujer o en un hombre en un contexto determinado.¹⁴

Igualdad sustancial: Supone la modificación de las circunstancias que impiden a las personas el ejercicio pleno de los derechos y el acceso a las oportunidades a través de medidas estructurales, legales o de política pública.¹⁵

¹² Artículo 170 del Reglamento de Fiscalización, *Op. Cit.*

¹³ Glosario de Términos sobre violencia contra las mujeres, Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. México, 2010.

¹⁴ https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/data/file/79365/Glosario_de_Terminos_completo_1.pdf

¹⁵ Glosario de Igualdad de Género, UN Women Training Centre eLearning Campus. <https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150>

¹⁶ Artículo 170 del Reglamento de Fiscalización, *Op. Cit.*

Igualdad sustantiva: Mientras que la igualdad formal (normativa o de iure) se sustenta en la idea de que la ley debe aplicarse de forma similar a cada persona, se vincula estrechamente con la idea de igualdad ante los tribunales y también con el principio de legalidad; la igualdad sustantiva (material o de facto) alude al compromiso de remover los obstáculos que en el plano económico, político y social configuran efectivas desigualdades de hecho que se oponen al disfrute efectivo de los derechos. La igualdad sustantiva tiene un carácter compensador, emancipatorio, corrector y defensivo ante los fenómenos históricos de segregación y marginación.¹⁶

Investigación: Generación y provisión de información -cualitativa y cuantitativa- e insumos para orientar, direccionar y modificar las acciones, proyectos y estrategias especializados a favor de la igualdad de género y no discriminación. La investigación debe ser estratégica para propiciar el empoderamiento político de las mujeres o bien para fomentar y promover su participación política.

Liderazgo político de las mujeres: Se refiere a las competencias, habilidades y capacidades de las mujeres, para influir en una esfera pública y política determinada, con pleno ejercicio de sus derechos en el ámbito político.

Medidas para la igualdad: Acciones deliberadas, coherentes, que las instituciones públicas determinan dentro de su ámbito de obligaciones de derechos humanos y objeto institucional, para corregir condiciones de desigualdad de trato hacia personas y grupos discriminados históricamente -o de manera reiterada- en el acceso y disfrute de sus derechos humanos, las libertades y los bienes y servicios públicos.¹⁷

Participación política de las mujeres: Derecho universal de las mujeres, basado en la idea de la homogeneidad, que busca que mujeres y hombres, en igualdad de condiciones, tengan la misma capacidad de participar en la vida pública y política, así como en los espacios de toma de decisiones, o en cualquier otro ámbito social.

Perspectiva de género: Permite visibilizar la asignación social diferenciada de roles y tareas en virtud del sexo; revela las diferencias en oportunidades y derechos que siguen a esta asignación; evidencia las relaciones de poder originadas en estas diferencias; y pregunta por los impactos diferenciados de las leyes y políticas

¹⁶https://piensadh.cdhdh.org.mx/images/publicaciones/material_de_capacitacion/fase_de_actualizacion_permanente/2011_Herramientas_para_una_compreension_amplia_de_la_igualdad_sustancial_y_la_no_discriminacion.pdf

¹⁷ Catálogo de medidas para la igualdad publicado por la SEGOB y el CONAPRED, consultable en http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/CatalogoMedidas_WEB_Mireya_topqrI_INACCSS.pdf

públicas e institucionales basadas en estas asignaciones, diferencias y relaciones de poder.¹⁸

Promoción del liderazgo político: Impulso de acciones afirmativas y estrategias de incidencia que fomenten, desarrollen e impulsen el efectivo liderazgo político de las mujeres.

Sensibilización: Proceso a través del cual se busca crear empatía, promover una actitud diferente, libre del uso de estereotipos y estigmas acerca de las prácticas, situaciones y grupos en situación de discriminación.

Sesgo de género: Implica el reforzamiento de discursos, prácticas y representaciones para favorecer, en detrimento del otro, ya sea lo masculino o lo femenino.¹⁹

Techo de cristal: Barreras invisibles a través de las cuales las mujeres pueden ver las posiciones de élite, por ejemplo, en el gobierno o el sector privado, pero no las pueden alcanzar. Conjunto de normas no escritas al interior de las organizaciones (partidos políticos) que dificulta el tener acceso a los puestos de alta dirección. Su carácter de invisibilidad es resultado de la ausencia de leyes y códigos explícitos que impongan a las mujeres semejante limitación.²⁰

Transversalidad: Incorporar la perspectiva de género en los distintos niveles y etapas que conforman el proceso de formulación, ejecución y evaluación de las acciones y proyectos, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse del impacto y se eliminen las desigualdades de género.²¹

Violencia Política Contra las Mujeres: La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida.

¹⁸ Artículo 170 del Reglamento de Fiscalización, *Op. Cit.*

¹⁹ Instituto Nacional de las Mujeres (S/F)

²⁰ Glosario de Igualdad de Género, UN Women Training Centre eLearning Campus. <https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150>

²¹ Glosario de Igualdad de Género, UN Women Training Centre eLearning Campus. <https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150>

V. PLANEACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) PARA LA CPDLPM

El Programa Anual de Trabajo (PAT) es la herramienta que utilizan los partidos políticos para planificar, registrar y ejecutar sus recursos del gasto programado, el cual debe entregarse ante la UTF dentro de los 30 días siguientes a la aprobación del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes por parte del Consejo General del INE o en su caso, por el Consejo General del Organismo Público Local en las entidades federativas, de acuerdo con el artículo 170 del Reglamento de Fiscalización (RF).

En caso de que, durante la ejecución de los programas, se considere una modificación a la planeación de los PAT, los partidos políticos deberán informarla a la UTF, hasta 15 días posteriores al cambio o modificación, de acuerdo con el artículo 170 del RF.

Es facultad exclusiva de los partidos políticos definir la planeación, los objetivos, los indicadores, los presupuestos, la temporalidad y la asignación de recursos del gasto programado, de conformidad con el artículo 165 del RF. Además de que todos los gastos realizados para el desarrollo de las actividades referidas deben ser pagados en el ejercicio fiscal correspondiente.

El proceso de planeación con enfoque de género debe atender necesidades estratégicas de mujeres y hombres, orientadas hacia una transformación estructural del sistema de relaciones entre los sexos y debe considerar aspectos tales como los procesos de planeación participativa con equidad, donde el centro de interés no es la mujer como categoría individual, sino el género como categoría de análisis, lo que conlleva el análisis de las dimensiones y relaciones sociales desiguales entre mujeres y hombres.²²

Particularmente, el PAT para la CPDLPM deberá contener proyectos orientados a propiciar la igualdad de oportunidades en el ámbito político, formar competencias para el acceso de las mujeres al ejercicio del poder público y la participación en los procesos de toma de decisiones mediante el diseño de estrategias integradas por actividades y tareas ordenadas y encaminadas a atender las problemáticas

²²Glosario de Género Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100904.pdf

detectadas en el ejercicio de sus derechos político-electorales, procurando siempre beneficiar al mayor número de mujeres.

Los subrubros de gasto del programa para la CPDLPM son:

- Capacitación y formación para el liderazgo político de las mujeres.
- Investigación, análisis, diagnósticos y estudios comparados.
- Divulgación y difusión.

La estructura de cada proyecto que constituya el PAT en los subrubros citados deberá incluir los siguientes elementos:

- La justificación, objetivos, metas e indicadores a desarrollar durante el año, así como el alcance y los beneficios del proyecto.
- Las actividades y tareas que darán cumplimiento a los objetivos, metas e indicadores.
- El presupuesto asignado por actividad, identificando de manera clara los rubros que serán objeto del gasto, indicando Capítulo, Objeto y Partida.
- El cronograma para la ejecución, seguimiento de resultados y monitoreo de indicadores.
- Las personas responsables de la organización y ejecución, así como las del control y seguimiento.
- Los resultados específicos o entregables del Proyecto.

A continuación, se analiza cada uno de los elementos de la estructura de los proyectos que integran al PAT con el fin de que los partidos políticos nacionales y locales tengan claridad de lo que deben incluir:

1. JUSTIFICACIÓN

El glosario del Instituto Nacional de las Mujeres define al diagnóstico en materia de igualdad de género de la siguiente forma:

*“Es una herramienta de sistematización y análisis de información utilizada para identificar y abordar problemas dentro de una institución o una situación social dada. No existe un procedimiento estándar o único para realizar un diagnóstico, pues las técnicas y herramientas para recolectar e interpretar la información pueden variar según la naturaleza del problema. Por ejemplo, se pueden realizar diagnósticos institucionales, sociales, ambientales, pedagógicos y organizacionales, entre otros, y cada uno tendrá una manera particular de abordar las dimensiones de estudio...”*²³

Así, el diagnóstico con perspectiva de género debe brindar información cuantitativa y cualitativa, basada en instrumentos de análisis como grupos de enfoque, entrevistas en profundidad, datos estadísticos y demográficos- de fuentes oficiales- entre otros, que permitan identificar y caracterizar el problema o los problemas principales que enfrentan las mujeres para el igualitario ejercicio de sus derechos político-electorales, así como sus causas y efectos, a fin de sustentar las acciones para propiciar la atención y solución del problema identificado. La comparación con el acceso de los hombres a los mismos derechos es siempre un buen parámetro de referencia. Asimismo, la diferenciación por características específicas de las mujeres (origen étnico, edad, en situación de discapacidad, preferencia sexual, condición social, condiciones de salud, religión, estado civil o cualquier otra). Por ejemplo: cómo promover el liderazgo de mujeres indígenas, afromexicanas, trans, lesbianas, con discapacidad, o de ciertas regiones del país, si son rurales o urbanas, entre otras.

Para la justificación de un proyecto de CPDLPM, es necesario realizar diagnósticos con perspectiva de género que permitan identificar cuál es la situación de las mujeres en el ámbito político y los problemas que enfrentan para ejercer sus derechos político-electorales en un marco de igualdad y no discriminación por razones de género, así como identificar cuáles son las competencias y necesidades que deben ser atendidas para el empoderamiento político de las mujeres; es decir, debe brindar explicaciones de cuál es la razón y utilidad de realizar una determinada acción dentro del PAT.

²³ INMUJERES, “Glosario de género”, México 2007, p. 51. Consultado el 26 de febrero de 2018 en: <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/81418/5red1p.pdf>

Por ejemplo, existen diversos tipos de metodologías que son aplicables para la construcción de la justificación, tales como;

- Para detectar las necesidades de capacitación de las militantes y/o simpatizantes de un partido y población en general, se puede aplicar un diagnóstico DNC.
- Para detectar las oportunidades y amenazas sobre un tema en específico se puede aplicar un análisis FODA.
- Para detectar percepción de una población determinada se pueden plantear grupos de enfoque.
- Para detectar percepción concentrada en una muestra representativa de una población afectada por algún problema se pueden utilizar entrevistas en profundidad.
- Para detectar relaciones causales (causa-efecto) se puede emplear un análisis de espina de pescado (Ishicawa).
- Para detectar problemas y objetivos de una situación específica se puede utilizar marco lógico.

Por tanto, la problemática de género mostrada en el diagnóstico es la justificación por la cual debe ejecutarse un proyecto del PAT, es decir, constituye el eje central o vital hacia donde se orientará dicho proyecto.²⁴

2. OBJETIVO

El objetivo es un elemento programático y, para efectos del proyecto, constituye el propósito a cumplir con la realización de los proyectos del PAT, por lo que deberá especificar claramente las prioridades y la determinación de las estrategias.

Así, el objetivo es el resultado futuro o lo que se pretende alcanzar en un tema determinado, que contribuirá a solucionar el problema o necesidad identificada en el diagnóstico vinculado con las limitaciones que enfrentan las mujeres para acceder y ejercer sus derechos político-electorales en igualdad con los hombres, sin discriminación y sin violencia.

Sus características son:

²⁴ Lineamientos para el Gasto programado, aprobados por el Consejo General mediante el Acuerdo INE/CG21/2015, en la sesión ordinaria de 28 de enero de 2015.

- Atender en lo general, el conjunto de cada proyecto del PAT; y en lo particular, a cada componente del mismo.
- Expresar una situación a la que se arribará con el desarrollo del proyecto como resultado de la atención de un aspecto central del problema de género identificado en el diagnóstico.
- Debe ser acotado, realista, evaluable, cuantificable y orientado a un fin para materializar la igualdad de género o contribuir al adelanto en las mujeres para su ejercicio político.
- Delimitado a un tiempo (corto, mediano y largo plazo) y espacio (distrito, estado, región, país).
- Debe ser redactado en un lenguaje incluyente.

3. META

Se define la meta como aquello que:

“Permite establecer límites o niveles máximos de logro; comunica el nivel de desempeño esperado por la organización y permite enfocarla hacia la mejora.”²⁵

En resumen, la meta es una expresión cuantitativa del objetivo, que permitirá medir el cumplimiento de cada proyecto del PAT y el resultado obtenido en términos de generar mejores condiciones para la igualdad de género y el adelanto de las mujeres en el ejercicio de sus derechos político-electorales.

La meta tiene 4 componentes básicos:

- **Intención concreta.** Debe estar directamente relacionada con el cumplimiento de un objetivo establecido.
- **Medida determinada.** Parametrización del objetivo, con unidades de medida que posibiliten la medición de su cumplimiento en el tiempo.
- **Plazo de cumplimiento.** Se refiere al periodo que se tiene para alcanzar el objetivo establecido.
- **Periodicidad.** Se refiere a la unidad de medida temporal en la cual se medirá la meta para su adecuado seguimiento, puede ser anual o semestral.

²⁵ CONEVAL, Manual para el Diseño y la Construcción de Indicadores, México 2014.

Las metas deben tener un valor cuantitativo que, relacionado con la capacidad técnica, humana y financiera, sea posible de alcanzar en un determinado periodo.

En este sentido, es importante evitar fijar metas que sobrepasen la capacidad del partido y, en consecuencia, no sea posible cumplirlas (inviabiles) o, al contrario, metas fáciles de alcanzar y superar (no retadoras).

Para que las metas sean relevantes para orientar los proyectos hacia la contribución del adelanto político de las mujeres, deben reflejar aspectos básicos en el cumplimiento de los objetivos, así como, en los casos en que aplique, estar desagregadas por género.

Las metas deberán evidenciar los resultados al ejecutar el gasto programado. El PAT planteará metas globales, mientras que el proyecto deberá concentrarse en metas específicas.

4. INDICADOR

El indicador permite reflejar en los informes trimestrales y en el informe anual el avance de la meta establecida.

Se define al indicador como:

“Instrumento que provee evidencia de una determinada condición o el logro de ciertos resultados. Esta información puede cubrir aspectos cuantitativos y cualitativos sobre los objetivos de un programa o proyecto.”²⁶

El indicador debe medir el avance o retroceso respecto de la situación inicial identificada en el diagnóstico.

“En resumen, un indicador debe cumplir, en principio, con las dos siguientes características:

- a) El indicador debe ser una relación entre dos o más variables.*
- b) El indicador debe estar contextualizado al menos geográfica y temporalmente.*

²⁶ CONEVAL, Manual para el Diseño y la Construcción de Indicadores. Op. Cit.

c) El indicador debe referir el diagnóstico de la problemática inicial, para que sea posible evaluar el resultado.²⁷

Un indicador debe cumplir con las siguientes características:²⁸

- **Específico.** Debe estar vinculado con objetivos, metas y/o la política a la que se pretende dar seguimiento de forma clara para poder evaluar qué tan cerca o lejos se está de los mismos para proceder a tomar las decisiones pertinentes.
- **Explícito.** Su nombre debe ser suficiente para entender si se trata de un valor absoluto o relativo, de una tasa, una razón o un índice, así como a qué grupo de población, sector económico o producto se refieren y si la información es global o está desagregada por género, edad, o región geográfica.²⁹
- **Medible.** Requiere contar con datos confiables y completos para su cuantificación, así como disponibilidad para varios años y diferentes regiones. No es posible basar un indicador en los resultados de una encuesta aplicada a un grupo seleccionado a voluntad; para que la medición sea objetiva, la encuesta debería aplicarse a un grupo seleccionado aleatoriamente y con base en una muestra.
- **Práctico (económico).** El cálculo del indicador no debe implicar esfuerzos extraordinarios de trabajo y debe tener un costo proporcional. Por ejemplo, un indicador cuyo cálculo requiera hacer extensivas encuestas no sería práctico ni económico.
- **Relevante.** Mide el aspecto más importante del logro del objetivo con la finalidad de obtener resultados significativos.
- **Oportuno.** Debe especificarse el período de tiempo para el cual se calculará el indicador (mensual, trimestral, semestral, anual, bianual) con el fin de que la información esté disponible en el momento necesario y convenido.

Por el tipo de información que contiene, el indicador puede ser:

- **Entrada.** Se refieren a los recursos asignados.
- **Proceso.** Basado en controlar los logros en el curso de la ejecución de los proyectos, especialmente la progresión hacia los resultados deseados.

²⁷ CONEVAL, Manual para el Diseño y la Construcción de Indicadores. Op. Cit.

²⁸ MONDRAGÓN Pérez, Angélica R. ¿Qué son los indicadores?, Notas, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), No. 19, Julio-septiembre, 2002.

²⁹ MONDRAGÓN Pérez, Angélica R. ¿Qué son los indicadores?, Op cit.

- **Salida.** Se relacionan directamente con los resultados a más largo plazo del proyecto cuando ha concluido.
- **Cuantitativo.** Basado en aquello que puede ser medido en cantidad, número o porcentaje.
- **Cualitativo.** Basado en percepciones, opiniones o juicios. (unidades de medida: tipo, grado y nivel).
- **Mixtos.** Permite identificar cambios cuantitativos y cualitativos al mismo tiempo que presenta una unidad de medida y de número o porcentaje y una unidad de medida de verificación con tipo, grado o nivel. Estos indicadores permiten verificar tanto la magnitud o profundidad de los cambios obtenidos en cuanto su amplitud o profundidad

Las cuatro dimensiones del indicador, configuran el aspecto del logro del objetivo a cuantificar, esto es, la perspectiva con que se valora cada objetivo, y son:

- **Eficacia.** Los indicadores de eficacia miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido, es decir, dan evidencia sobre el grado en que se están alcanzando los objetivos descritos.³⁰
- **Eficiencia.** Los indicadores de eficiencia miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. Estos indicadores cuantifican lo que cuesta alcanzar el objetivo planteado; abarca recursos económicos, humanos y materiales empleados para cumplir el objetivo específico.³¹
- **Calidad.** Los indicadores de calidad permiten monitorear los atributos desde diferentes perspectivas: la oportunidad, la accesibilidad, la percepción de las personas usuarias y la precisión en la entrega de los servicios.³² Es decir, miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.
- **Economía.** Estos indicadores cuantifican el uso adecuado de los recursos financieros, miden la capacidad para administrar, generar o movilizar dichos recursos.³³

³⁰ CONEVAL, Manual para el Diseño y la Construcción de Indicadores, Op. Cit.

³¹ CONEVAL, Manual para el Diseño y la Construcción de Indicadores, Op. Cit.

³² CONEVAL, Manual para el Diseño y la Construcción de Indicadores, Op. Cit.

³³ CONEVAL, Manual para el Diseño y la Construcción de Indicadores, Op. Cit.

La diferencia esencial con los indicadores de eficiencia (relacionados con recursos económicos) es que a los indicadores de economía “no les interesa el cumplimiento de los objetivos”; únicamente observan la administración de los recursos financieros por parte de quienes son las personas responsables del programa.

Los tipos de indicadores que pueden utilizarse son de:

- **Cobertura.** Miden el alcance del objetivo en relación con el universo o población delimitada.
- **Proceso.** Miden el alcance de los beneficios obtenidos por un programa a corto plazo.
- **Gestión.** Miden el avance y logros en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios son generados.
- **Impacto.** Miden la efectividad de un proyecto y expresan los cambios duraderos o de largo plazo ocasionados a partir de las acciones implementadas. Deben permitir la comparación con la situación anterior a la implementación del programa y en los sucesivos cortes evaluativos programados. Se parte de una “línea base” y los momentos de evaluación intermedia, final y de impacto.
- **Desempeño o de Resultado.** Miden el grado de cumplimiento de los objetivos y prioridades del programa, es decir, determinan el grado en que el proyecto logró los resultados que pretendía obtener.
- **Efecto.** Se refieren a los resultados intermedios, inmediatos de la formación y desarrollo de competencias de las personas, las empresas o la sociedad. Representan el encuentro de las acciones formativas, con la demanda de las y los participantes.

En síntesis, un indicador cuantitativo es un valor que describe un fenómeno o situación particular en un periodo de tiempo y espacio geográfico determinado que permite mostrar, el avance de un proyecto, en qué parte se encuentra con respecto a las metas, así como determinar su impacto, o bien a través de indicadores cualitativos es posible conocer información respecto del impacto de los proyectos o programas, por medio de percepciones y comportamientos.³⁴

Es necesario que los indicadores estén relacionados con las metas y reflejen aspectos relevantes de los objetivos para valorar su cumplimiento; además deben

³⁴Glosario de Género Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100904.pdf

estar desagregados por sexo, y contener en la medida de lo posible aspectos relevantes para el análisis de género como edad, condición étnica, región, discapacidad, entre otros, y que muestren no solo el nivel de procesos y gestión, sino que estén orientados a medir resultados, efectos y calidad.

Es deseable que un proyecto PAT que se incluya al menos un indicador de cada tipo que muestren:

- La situación de la que parten los hombres y las mujeres en el ámbito político.
- Las brechas de género que deben eliminarse dentro de la participación política de las mujeres.
- La participación de las mujeres y de los hombres en las distintas etapas del desarrollo de los proyectos y las razones de sus ausencias en los mismos.

EJEMPLO INDICADORES	
Concepto/denominación	Acceso de las mujeres indígenas, afromexicanas, parte de la comunidad LBGTTHIQ, rurales y con alguna discapacidad como militantes del partido político "X"
Objetivo del indicador	Incrementar el porcentaje de mujeres indígenas, afromexicanas, parte de la comunidad LBGTTHIQ, rurales y con alguna discapacidad como militantes del partido político "X"
Meta que cumple el indicador	Medir un aumento hasta un 20% en la proporción de mujeres indígenas, afromexicanas, parte de la comunidad LBGTTHIQ, rurales y con alguna discapacidad en la militancia del partido político "X"
Unidad de medida	Porcentaje
Definición del objeto de medición	Mujeres indígenas, afromexicanas, parte de la comunidad LBGTTHIQ, rurales y con alguna discapacidad militantes del partido político "X"
Variables	V1: Hay mujeres indígenas o afromexicanas que militan en el partido político "X" V2: Hay mujeres con discapacidad al interior de los partidos políticos V3: Las mujeres al interior de los partidos asumen una identidad de género distinta a la heterosexual V4: ¿Ha sido militante de algún otro partido? ¿Cuántos años de militancia? V5: ¿Ha ocupado algún puesto público? ¿Cuál?, ¿Por cuántos años? V6: ¿Ha recibido capacitación previamente? ¿Cuántos cursos y cuáles?

EJEMPLO INDICADORES	
Método de cálculo utilizado	<p>NMSVMPP: Número de mujeres en situación de vulnerabilidad militantes del partido político "X"</p> <p>NMSVIMPP: Número de mujeres en situación de vulnerabilidad incorporadas como militantes del partido político "X"</p> <p>NMSVLIMPP Número de mujeres en situación de vulnerabilidad que logran incorporarse como militantes al partido político "X"</p> $\text{NMSVMPP} = \frac{\text{NMSVIMPP}}{\text{NMSVLIMPP}} \times 100$
Tipo	Cuantitativo
Periodo	Anual
Diagnóstico de la situación inicial	Cuántas mujeres indígenas, afromexicanas, parte de la comunidad LBGTITI, rurales y con alguna discapacidad son militantes del partido político "X".

5. PRESUPUESTO

Es la herramienta programática que permite cuantificar y calendarizar los recursos necesarios para realizar el PAT y sus proyectos, se integrará con los recursos y/o insumos necesarios para la realización de las actividades y tareas que serán objeto de gasto, para lo cual se deberá:

- Planear los costos: Conforme al valor razonable (artículo 26 del Reglamento de Fiscalización), realizar cotizaciones de mercado y con personas, empresas y organizaciones proveedoras registradas en el Registro Nacional de Proveedores del INE.
- Tener suficiencia: Considerar todos los elementos implicados para el desarrollo y ejecución de una actividad, incluyendo aquellos elementos que son necesarios cubrir para garantizar la participación de las mujeres en las distintas actividades programadas, por ejemplo, personas que apoyen en el cuidado de hijos e hijas u otras personas a cargo de las mujeres mientras asisten a las actividades.
- Concretizar: Ajustar los gastos a las actividades de manera concreta y verificable en cantidad, calidad y costos.
- Detallar: Desglosar los costos por actividad y tarea para facilitar la comprensión.

- e) Alinear: Aplicar los recursos conforme a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, transparencia, control, rendición de cuentas e igualdad de género.

Invariablemente los recursos presupuestados deben estar directamente vinculados con las actividades y tareas planificadas y, deberán ser suficientes para su desarrollo y ejecución.

6. CRONOGRAMA

El cronograma es una herramienta programática para dar seguimiento a la ejecución de actividades y tareas, monitoreo de indicadores y resultados obtenidos, en una estructura de tiempo, esto es por días, semanas o meses. El diseño de los cronogramas se hace con base en las necesidades e intereses del partido político, enfocándose a que sus PAT se realicen de forma organizada.

La construcción de un cronograma requiere integrar los siguientes elementos:³⁵

- Las actividades y sus tareas
- Las fechas de ejecución
- Las personas responsables de cada actividad
- Los periodos (mensuales, semanales, diarios)

7. PERSONAS RESPONSABLES

Los PAT deben contar con nombres y firmas de las personas responsables de la:

- Organización y ejecución, y
- Control y seguimiento.

Con base en todo lo anterior, la planeación es *“un proceso anticipatorio de asignación de recursos (personas, bienes, dinero y tiempo) para el logro de fines determinados.”*³⁶

³⁵ Lineamientos para el Gasto programado. Op Cit.

³⁶ Tomás Miklos y María Elena Tello, *“Planeación interactiva”*, México, Limusa-Noriega, 1993.

El partido político debe definir estrategias para contribuir al adelanto en el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres y a generar mejores condiciones para la igualdad de género de acuerdo con su población objetivo, la problemática y necesidades de las mujeres diagnosticadas y los objetivos y metas a alcanzar en sus Programas Anuales de Trabajo.

Una vez que se tiene definida la estrategia, los institutos políticos deben diseñar proyectos que se apeguen a las finalidades que tienen como partidos políticos, así como a los objetivos señalados en el artículo 163 del RF para los rubros del Gasto Programado, y cuidar que ningún proyecto se encuentre dentro de las restricciones del gasto señaladas en el artículo 168 del mismo reglamento, que son las siguientes:

- Actividades ordinarias permanentes de los partidos, incluidas las referentes a los gastos operativos, servicios personales y generales de las Secretarías de la Mujer de los partidos u órganos equivalentes, cuando no se relacionen de manera directa y exclusiva con las actividades del gasto programado.
- Actividades como cursos, eventos, encuestas, investigaciones, estudios, análisis, publicaciones, propaganda electoral de los partidos para las campañas de sus candidatos y candidatas a puestos de elección popular; así como, la preparación, edición, impresión y divulgación de las plataformas electorales.
- Actividades que tengan por objeto evaluar condiciones del partido o que pretendan preparar a sus dirigentes para el desempeño de cargos directivos.
- Actividades que tengan por objeto primordial la promoción del partido, o de su posicionamiento frente a problemas nacionales en medios de comunicación masiva.
- La celebración de las reuniones por aniversarios, congresos y reuniones internas que tengan fines administrativos o de organización interna.
- Erogaciones por concepto de hipotecas de oficinas de Organizaciones Sociales encargadas de realizar las actividades específicas.
- Gastos operativos relacionados con el mantenimiento, de manera enunciativa más no limitativa, gastos por pago de líneas telefónicas; inmuebles, servicios de limpieza o seguridad, entre otros.

Para el diseño de los proyectos, los partidos políticos deben considerar como punto de partida las brechas de desigualdad, los problemas específicos y las necesidades detectadas para garantizar la igualdad en los derechos político-electorales de las

mujeres, ante los cuales deben trazar las estrategias propias para enfrentarlos y contrarrestarlos, con énfasis en atender las causas de los mismos.

Las estrategias configuran el conjunto integrado de acciones que el partido político tendrá que operar en el PAT bajo determinados factores o condiciones; por tal motivo, se sugiere que la creación de dichas estrategias se realice de manera conjunta entre las áreas operativas (integrantes del órgano interno partidista de la mujer), de seguimiento (titulares del órgano interno partidista de la mujer) y de finanzas. Ello es así, pues el órgano interno partidista de la mujer conoce de primera mano, las necesidades de las militantes y/o simpatizantes, así como de la población en general; situación que facilita la implementación de programas y acciones que promuevan, fortalezcan y desarrollen los liderazgos y empoderamientos políticos de las mujeres.

Una correcta planeación estratégica facilita la programación del gasto mediante la coherencia y alineación entre objetivos, metas e indicadores; por tal motivo, los partidos políticos deben de atender los criterios señalados.

VI. APLICACIÓN DEL RECURSO EN LOS SUBRUBROS DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES

A continuación, se desarrollarán los subrubros de gasto desde el punto de vista de la planeación, la ejecución y la comprobación con el fin de que los partidos políticos puedan hacer un gasto adecuado del presupuesto etiquetado para el rubro objeto del presente Protocolo.

1. CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES

La capacitación y formación política para las mujeres es una de las formas para potenciar su participación política y empoderamiento político, impulsar el desarrollo de sus habilidades, así como su liderazgo político.

La capacitación constituye una estrategia de empoderamiento para que las mujeres participen en la política, de ahí la importancia de que esta capacitación y formación

sea estratégica, focalizada, diferenciada y dirigida al objetivo que se pretende conseguir.

Es muy importante que la capacitación se encuentre alineada con el diagnóstico en cuanto a posición y condición de género de quienes recibirán la capacitación, lo cual, a su vez, debe estar vinculado a los objetivos, metodología y contenidos de la misma.

A. PLANEACIÓN

El subrubro de capacitación y formación enfocado a la CPDLPM es fundamental para alcanzar los objetivos de desarrollar habilidades y aptitudes, así como adquirir conocimientos y herramientas que favorezcan el liderazgo de las mujeres en la participación política.

Por capacitación debe entenderse los programas enfocados a los procesos de enseñanza-aprendizaje que los partidos políticos deben implementar para ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes que fomenten el liderazgo político y el empoderamiento de las mujeres, a fin de lograr una mayor participación en la toma de decisiones y lograr la igualdad con sus pares hombres.

Por lo que, en el presente apartado, se analizarán los elementos básicos a considerar para la implementación de procesos de capacitación eficientes.

Las actividades que los partidos políticos pueden organizar y realizar son las señaladas, de manera enunciativa y no limitativa, en el artículo 163, numeral 1, inciso b), fracciones III y IV y 186 del RF tales como: mesas de trabajo, conferencias, talleres, coloquios, seminarios, diplomados, debates, mesas redondas, o cualquier evento similar que permita:

- Capacitar en temas relacionados con la situación que guarda la participación política de las mujeres; así como el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de acciones y programas orientados a dicho fin.
- Desarrollar habilidades y aptitudes en las mujeres, así como adquirir conocimientos y herramientas que favorezcan su liderazgo y participación política.
- Favorecer el desarrollo de competencias para la participación política de las mujeres (conocimientos, habilidades y actitudes) y la defensa de sus derechos políticos.

Dicho ordenamiento señala las temáticas que pueden atender los partidos políticos para la planeación de sus actividades, tales como:

- Situación que guarda el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político;
- Diseño, implementación, seguimiento y evaluación de acciones y programas que favorezcan la participación política de las mujeres y la defensa de sus derechos políticos;
- Igualdad sustantiva entre hombres y mujeres;
- Marco jurídico nacional e internacional para la protección de los derechos humanos de las mujeres;
- Derecho electoral y parlamentario;
- Transversalización de la perspectiva de género y de los derechos humanos de las mujeres;
- Acciones, programas y políticas públicas y presupuestos con perspectiva de género;
- Negociación y resolución de conflictos en temas políticos;
- Comunicación política;
- Nuevas tecnologías;
- Liderazgo político;
- Cabildeo;
- Mercadotecnia política;
- Oratoria parlamentaria;
- Monitoreo de acceso al poder con perspectiva de género; y
- Violencia política contra las mujeres en razón de género.

Asimismo, todos los proyectos que integren los programas de gasto para la CPDLPDPM deberán diseñarse y aplicarse con base en los criterios de actuación establecidos en el artículo 170 numeral 2 del RF, los cuales pueden constituirse en temas a desarrollar en las acciones de capacitación:

- Acciones afirmativas,
- Avance de las mujeres,
- Empoderamiento de las mujeres,
- Igualdad sustantiva,
- Liderazgo político de las mujeres,
- Desarrollo del liderazgo político,
- Promoción del liderazgo político y

- Perspectiva de género.

Una vez seleccionada el tipo de actividad, el tema, objetivo y los elementos que integran los proyectos, señalados en el apartado anterior, los partidos políticos deben considerar:

- La estrategia de capacitación para cada evento en función de la población objetivo.
- El lugar en donde se realizará el evento que considere las condiciones mínimas para un buen aprovechamiento de las personas asistentes y garantice la accesibilidad a las personas con discapacidad.
- Los horarios en que se desarrollará la actividad, los cuales deberán ser pedagógicos y en horas que no pongan en riesgo la seguridad de las personas.
- El perfil y la experiencia de la(s) persona(s) ponente(s) estén alineados con el tema del evento.
- En caso de que la actividad sea verificada, se debe proporcionar al personal autorizado por el INE, la documentación y muestras correspondientes para acreditar dicha actividad.

B. EJECUCIÓN

Una vez definidos los proyectos de capacitación, los partidos políticos deberán ejecutar lo estipulado en las actas constitutivas del proyecto respectivo, para lo cual están obligados a presentar un escrito de invitación a la UTF, con al menos 10 días hábiles de anticipación a la celebración de la actividad.

Dicho aviso deberá detallar la descripción y objetivo del evento, la ubicación precisa, fecha y hora en que se realizará, los temas a tratar y el número estimado de personas asistentes desagregadas por sexo y edad, así como otros criterios que se consideren relevantes (pertenencia indígena, región o municipio de residencia, nivel de escolaridad, condición de discapacidad, experiencia previa en contiendas electorales etcétera).

Los partidos políticos deben designar a una persona responsable para atender la visita de verificación, quien será la encargada de entregar como muestra de sus actividades de capacitación y formación, lo siguiente:

- Convocatoria del evento.
- Programa del evento.

- Lista de personas asistentes con firma autógrafa, desagregados por sexo y edad (en cursos presenciales), o bien, registro de acceso de las personas participantes a la plataforma o similar (en cursos en línea).
- Fotografías, video o reporte de prensa del evento.
- En su caso, el material didáctico utilizado.
- Publicidad del evento, en caso de existir.

Para la verificación de las actividades de capacitación y formación, la UTF designará a quien la represente para asistir y levantar un acta, la cual contendrá como mínimo lo siguiente:

- Identificación clara y precisa del nombre del proyecto y actividad.
- Fecha de realización de la actividad.
- Duración de la actividad.
- Lugar en la que se efectuó.
- Descripción pormenorizada de la forma en que se desarrolló la actividad y de los productos o artículos que de ésta hubieran resultado.
- Número de personas asistentes desagregadas por sexo y edad.
- Razón social de las y los proveedores de servicios necesarios para realizar la actividad.
- Cualquier otro elemento que, a juicio de la persona funcionaria del INE, pueda ser de utilidad para generar convicción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevó a efecto la actividad correspondiente.
- Nombre y firma de la persona designada por el partido político.

Dichas constancias harán prueba plena de las actividades realizadas en los términos asentados en el acta respectiva, y serán complemento, en su caso, de las muestras obtenidas, según el artículo 167 del RF.

2. INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS, DIAGNÓSTICOS Y ESTUDIOS COMPARADOS

De los recursos otorgados para la CPDLPM, los partidos políticos podrán realizar investigaciones, análisis, diagnósticos y estudios comparados que identifiquen y brinden información sobre la situación que guarda el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, con el objeto de generar indicadores, acciones y programas orientados a la disminución de las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, e informar a la ciudadanía de la evolución, desarrollo y avances respecto del liderazgo político de las mujeres, de conformidad con el artículo 51,

numeral 1, inciso a) fracciones IV y V e inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos.

Una investigación con enfoque de género consiste en la indagación para aumentar los conocimientos sobre las desigualdades entre hombres y mujeres, los factores explicativos de ellas, así como sus efectos, en una determinada materia o asunto público, para lo cual se requiere la implementación de una metodología rigurosa y adecuada al tipo de trabajo que se pretende realizar. Los trabajos de investigación deberán ser de autoría propia e inédita y, como ya se dijo, con enfoque de género.

El Diccionario de la Real Academia Española define:

- *Análisis: “la distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos, como segunda acepción, lo define como el examen que se hace de una obra, de un escrito o de cualquier realidad susceptible de estudio intelectual”.*
- *Diagnóstico: “Una herramienta de sistematización y análisis de información utilizada para identificar y abordar problemas dentro de una institución o una situación social dada. No existe un procedimiento estándar o único para realizar un diagnóstico, pues las técnicas y herramientas para recolectar e interpretar la información pueden variar según la naturaleza del problema. Por ejemplo, se pueden realizar diagnósticos institucionales, sociales, ambientales, pedagógicos y organizacionales, entre otros, y cada uno tendrá una manera particular de abordar las dimensiones de estudio.”³⁷*

Los estudios comparados consisten en seleccionar casos del fenómeno que se desea explicar para descubrir cómo se relacionan, sus semejanzas o sus diferencias.

A. PLANEACIÓN

Las investigaciones, análisis, diagnósticos y estudios comparados que sean parte del PAT deben cumplir el objetivo de contribuir a eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres en el ejercicio y la defensa de sus derechos político-electorales, así como para su participación en el ámbito político. Tales trabajos deben elaborarse desde la perspectiva de género y derechos humanos, y contribuir

³⁷ INMUJERES “Glosario de género”, México 2007, p. 51. Consultado el 26 de febrero de 2018 en: <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/81418/5red1p.pdf>

de forma directa a la comprensión y elaboración de propuestas para la solución de las problemáticas detectadas.

Los trabajos de investigación deberán ser de autoría propia e inédita, mostrar calidad básica en relación con las reglas ortográficas, de sintaxis y de citas bibliográficas, y formularse con una metodología que cumpla con la estructura de contenido de una investigación académica, como lo es:

- **Introducción.** Es la guía donde se da una explicación breve y general del fenómeno estudiado, el objetivo y las preguntas de investigación. Deberá especificar la metodología de estudio y el diseño de investigación utilizado.
- **Justificación e importancia de la investigación.** Se refiere al análisis de por qué es conveniente estudiar el tema establecido y cuáles son los beneficios respecto de los derechos político-electorales de las mujeres (resultados, la relevancia social, las posibles aportaciones teóricas, metodológicas u otras que se deriven de su realización).
- **Objetivos de la investigación.** Son las guías del estudio y deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación, asimismo, deberán ser susceptibles de alcanzarse. Los objetivos de las investigaciones científicas se deben plantear mediante la pregunta: ¿qué propósito se pretende lograr con la investigación? Además, si a través de la investigación se intenta contribuir a resolver un problema en particular, entonces también se deberá plantear ¿cuál es ese problema y de qué manera el estudio podría ayudar a resolverlo? Debe asegurarse la correspondencia de los objetivos con la finalidad de contribuir al adelanto de las mujeres y el pleno ejercicio de sus derechos político-electorales.
- **Planteamiento y delimitación del problema.** Planteamiento del problema de investigación: claramente y sin ambigüedad, preferentemente a manera de preguntas; e implica la posibilidad de realizar pruebas empíricas o cuantitativas o una recolección de información cualitativa. Con respecto a la delimitación se deberá identificar qué es lo que se analizará y qué no. Se deberá garantizar la correspondencia del planteamiento con los objetivos del gasto programado.
- **Marco teórico y conceptual de referencia.** Exposición y análisis de las teorías, los paradigmas, las investigaciones y antecedentes históricos del problema de investigación. El marco teórico ayuda a prevenir y detectar errores cometidos en otros estudios, orienta sobre cómo ha sido tratado el problema de investigación por otras investigaciones, conduce al establecimiento de hipótesis

que habrán de someterse a prueba en la investigación e inspira nuevas líneas y áreas de investigación.

- **Formulación de hipótesis.** Es la explicación tentativa, formulada a manera de proposiciones, a las preguntas planteadas a partir del problema estudiado. Las hipótesis deben contener tres elementos básicos: unidad de análisis; variables, es decir, las características o propiedades de la unidad de análisis; y los elementos lógicos que relacionan las unidades de análisis con las variables.
- **Pruebas empíricas o cualitativas de las hipótesis.** En esta sección se prueba a través de los datos que fueron recolectados, si las hipótesis se cumplen o no. Para comprobar empíricamente las hipótesis pueden utilizarse una diversidad de herramientas, por ejemplo: análisis estadístico, estudio de casos, grupos de enfoque, encuestas y experimentos controlados.
- **Conclusiones y nueva agenda de investigación.** Es la presentación de los resultados de la investigación, así como las propuestas específicas para los problemas tratados y la sugerencia de nuevo temas o líneas de investigación.
- **Bibliografía.** Se refiere a la compilación del material utilizado en la investigación, que permita a cualquier persona acudir a las fuentes primarias para replicar el análisis y valorar la veracidad del conocimiento generado.

B. EJECUCIÓN

El partido político debe registrar e informar a la UTF las actividades de investigación que pretenda realizar durante el ejercicio que corresponda, además de los mecanismos utilizados y sus alcances para la difusión de los trabajos de investigación.

Adicionalmente, debe presentar como muestras que hagan prueba plena de la ejecución de la actividad, la investigación o el avance, que contenga la metodología señalada y las notas de investigación, así como los soportes de las mismas. Si del análisis de la investigación se determina que toda o partes de la misma han sido presuntamente plagiadas, el trabajo presentado no será considerado como un gasto en este rubro.

Es importante destacar que los trabajos que deriven de investigaciones podrán ser considerados para la edición y producción de impresos, videograbaciones, medios

electrónicos, medios ópticos y medios magnéticos, a través de los cuales se difundan los materiales o contenidos en comento.

El artículo 164 del RF establece que los partidos políticos deberán solicitar ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) y entregar a la UTF el registro de las investigaciones y su producto editorial, así como las actividades editoriales y audiovisuales que realicen relacionadas con la CPDLPM

3. DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN

Este subrubro se refiere a la elaboración, publicación y distribución de libros, revistas, folletos o cualquier forma de difusión de temas de interés relacionados con la paridad de género y el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, orientados a la difusión de problemáticas, retos y avances en la participación política de las mujeres, así como la promoción de sus derechos en el ámbito político y los mecanismos de acceso para su ejercicio efectivo; de igual manera contempla la realización de propaganda y publicidad relacionada con la ejecución y desarrollo de las acciones para el adelanto en la materia.

La divulgación socializa información para generar conocimientos, habilidades y actitudes en las mujeres que favorezcan el desarrollo de competencias para su participación política; es decir, es la manera de hacer llegar los materiales al mayor número de mujeres (simpatizantes y/o militantes) y personas en general.

Tanto la difusión como la divulgación favorecen el derecho de acceso a la información que a su vez contribuye a crear las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y su empoderamiento en el ámbito político.

A. PLANEACIÓN

El proceso de planeación del subrubro de divulgación y difusión incluye todas las acciones a fin de lograr que los medios utilizados (libros, revistas, folletos, medios electrónicos, medios ópticos, medios magnéticos o cualquier forma de difusión) atiendan la problemática a la que se ven expuestas las mujeres en la vida política y que buscan dar una solución a la misma. Por ello es necesario especificar en todos los casos los objetivos relacionados con la materialización del principio de igualdad

de género que se pretenden alcanzar con los productos del subrubro de divulgación y difusión.

Dentro de las actividades de divulgación y difusión señaladas en el artículo 187, numeral 2 del RF, quedan comprendidas:

- La edición y producción de impresos.
- Videgrabaciones.
- Medios electrónicos.
- Medios ópticos.
- Medios magnéticos y nuevas tecnologías de la información.
- Propaganda y publicidad a través de los cuales se difundan materiales o contenidos vinculados con al menos una actividad de capacitación y formación para el liderazgo político de las mujeres.

Se debe identificar el mejor medio de divulgación (revistas, folletos, trípticos, u otro tipo de impresión), para lo cual, los partidos políticos deben considerar la población objetivo (a quien va dirigido), el recurso económico con el que se cuenta, los objetivos establecidos para el adelanto de las mujeres y los medios adecuados para atender al mayor número de mujeres posible.

B. EJECUCIÓN

La ejecución es la puesta en marcha de las actividades y tareas planteadas en la planeación del proyecto, logrando el cumplimiento del objetivo y meta.

En caso de que la edición impresa o su reimpresión tengan un costo mayor de 1,250 Unidades de Medida y Actualización (UMA), una persona funcionaria del INE designada por la UTF corroborará la existencia del tiraje, para lo cual los partidos políticos deben tener en cuenta el valor total de cada edición impresa o reimpressa, incluso cuando dicha impresión o reimpresión se haya realizado en fragmentos cuyo costo individual sea menor al previsto en la fracción anterior.

Los partidos políticos deben presentar para la verificación del tiraje de las actividades editoriales, un escrito de invitación a la UTF con al menos 5 días hábiles de antelación a la fecha del evento.

Durante la verificación de la actividad, la persona responsable designada por el partido político para atender la visita de verificación, deberá entregar como muestra

de la realización de la actividad, el producto de la impresión, el cual deberá contener los siguientes datos:

- Nombre, denominación o razón social y domicilio de quien edita.
- Año de la edición o reimpresión.
- Número ordinal que corresponda a la edición o reimpresión.
- Fecha en que se terminó de imprimir.
- Número de ejemplares impresos, excepto en los casos de las publicaciones periódicas.

Los requisitos anteriores no se exigirán para aquellas publicaciones que no tengan el carácter de “divulgación”, mismas que consisten en revistas, diarios, semanarios o cualquier otra edición de naturaleza periódica.

Al igual que en el subrubro de capacitación y formación, la UTF designará a quien la represente para asistir y levantar un acta, la cual contendrá los elementos mínimos señalados en el artículo 166, numeral 3 del RF.

Asimismo, los partidos deben solicitar ante el INDAUTOR, el registro de los productos editoriales, así como todas las actividades editoriales y audiovisuales que realicen relacionadas con la CPDLPM.

VII. COMPROBACIÓN DEL GASTO DEL PAT DE CPDLPM

Los partidos políticos deben registrar el conjunto de proyectos y actividades que integran su PAT, contemplando la planeación, programación, presupuestación, ejecución, evaluación, seguimiento y control de cada una de sus actividades, además de registrar información comprobable que permita verificar la aplicación de recursos y la calidad, eficacia y eficiencia del gasto, a través de la verificación del cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores; mediante el sistema de rendición de cuentas.

De conformidad con el artículo 172 del RF, las operaciones realizadas en la aplicación de los recursos deberán incorporarse en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) y ser soportadas con:

- Las pólizas de registro, las cuales deberán estar acompañadas de los comprobantes fiscales vinculados con la actividad correspondiente.

- Las muestras o evidencias que señalen las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la actividad.
- El registro contable deberá asociarse a un proyecto del Catálogo Auxiliar de Proyectos del SIF.
- Contrato celebrado con quien funge como proveedor y/o prestador de servicios.
- Copia del cheque con que se realizó el pago o comprobante de transferencia electrónica de fondos
- Acta constitutiva del PAT con la que se vincule el gasto.

Adicionalmente los partidos políticos deberán realizar los registros contables en las cuentas presupuestales de ingresos y egresos "7-0-00-00-0000" habilitadas en el SIF para tal efecto, de conformidad con el Manual General de Contabilidad contenido en el Acuerdo CF/004/2017.

Asimismo, con el Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto programado, se revisará el cumplimiento informado por parte de los partidos políticos de los proyectos que integran los programas y las operaciones relativas al gasto para el desarrollo de sus actividades.

Todos los gastos realizados para la capacitación, el desarrollo de las investigaciones, análisis, diagnósticos y/o estudios comparados deberán ser pagados en el ejercicio fiscal correspondiente y estar vinculados con la actividad; particularmente, las tareas editoriales o de difusión deberán ser distribuidas en los doce meses posteriores a la fecha en que se reconoce el gasto.

Las actividades deberán ser difundidas por los partidos políticos entre su militancia y entre la ciudadanía, por lo menos a través de la distribución de ejemplares o de la presentación pública de las mismas. Asimismo, el partido deberá informar a la UTF sobre los mecanismos utilizados para la difusión de éstas y deberá aportar las pruebas conducentes conforme a la naturaleza de los medios de difusión empleados.

De conformidad con la Tesis XXI/2018 aprobada por la Sala Superior en sesión pública celebrada el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, en la resolución del Recurso de apelación SUP-RAP-758/2017, se determinó que los partidos políticos, como entidades de interés público, tienen la obligación de ejercer el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines y ejercicio que fueron entregados.

En ese sentido, aun cuando no exista alguna norma que lo ordene expresamente, de conformidad con los principios constitucionales, hacendarios y presupuestales de racionalidad, austeridad y anualidad que deben prevalecer en las finanzas del país, los partidos políticos tienen el deber de reintegrar al erario los recursos entregados para el desarrollo de actividades ordinarias y específicas que no fueron debidamente comprobados o devengados en cada ejercicio anual.

Por lo tanto, el INE tiene la facultad implícita de ordenar a los partidos políticos el reintegro de los recursos remanentes, mediante los **“Lineamientos para determinar el remanente no ejercido o no comprobado del financiamiento público otorgado a los Partidos Políticos Nacionales y locales para el desarrollo de actividades ordinarias y específicas, el procedimiento para reintegrarlo”**, aprobados mediante acuerdo INE/CG459/2018 por el Consejo General en sesión extraordinaria del 11 de mayo de 2018.

Lo anterior, a fin de garantizar los derechos de terceros frente a los compromisos de pago adquiridos por los partidos políticos, para lo cual, la autoridad fiscalizadora determinará el remanente del ejercicio ordinario federal o local, conforme a la balanza consolidada del ámbito federal o local, según sea el caso.

Una vez que los partidos políticos calculen el saldo o remanente a devolver, de conformidad con las fórmulas establecidas en el artículo 3 de los lineamientos señalados, deberán informar a la UTF, en la entrega del Informe Anual del ejercicio correspondiente, tomando en consideración los saldos y movimientos en cuentas de balanza registrados en el SIF, y será mediante el oficio de errores y omisiones que la autoridad fiscalizadora, verificará el cálculo del remanente reportado, las aclaraciones, documentación comprobatoria y ajustes que consideren convenientes.

Si en el Dictamen que quedó firme, la UTF determina que el gasto no corresponde a Actividades Específicas y se debe reclasificar al Gasto Ordinario, se deberá disminuir del monto de “Gastos para actividades específicas, o similar en el ámbito local” y sumar en el gasto ordinario para el cálculo del remanente de financiamiento público de ordinario.

Una vez que el Dictamen haya quedado firme, se girarán oficios dirigidos a los partidos políticos, informándoles el monto a reintegrar de financiamiento público y el beneficiario, número de cuenta o referencia, así como la institución bancaria en donde efectuarán el reintegro de recursos; posteriormente, deberán depositar o

transferir el monto a reintegrar, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción del oficio emitido por el la Dirección Ejecutiva de Administración o de los Organismos Públicos Locales, según se trate.

Aunado a lo anterior, resulta importante destacar, que si derivado de la revisión de informes, la UTF determina irregularidades por no destinar los recursos del gasto programado para la CPDLPM en los porcentajes a los que están obligados los partidos políticos, ésta propondrá las sanciones correspondientes en el proyecto de Resolución, que deberá ser aprobado por la Comisión de Fiscalización previo a la consideración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

El Consejo General para la individualización de la sanción, deberá realizar la valoración de la falta del sujeto infractor, tomando en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma, señaladas en el artículo 338, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, las cuales son:

- a. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan en cualquier forma las leyes electorales, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él.
- b. El dolo o culpa en su responsabilidad.
- c. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la falta.
- d. La capacidad económica del infractor.
- e. Las condiciones externas y los medios de ejecución.
- f. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.
- g. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

Una vez determinada la gravedad de la falta, el Consejo General fijará la sanción correspondiente, de conformidad con el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Actualmente, se han impuesto a los partidos políticos, sanciones equivalentes al 100% del importe subejercido. En caso de no aplicar el recurso en el siguiente ejercicio fiscal inmediato, se consideran como reincidentes por el incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere la normatividad electoral, según lo señalado en el artículo 339 del RF.

VIII. PROBLEMÁTICAS Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL GASTO PROGRAMADO

1. PROBLEMÁTICAS DETECTADAS EN EL EJERCICIO DEL GASTO

Los dictámenes que realiza la UTF informan a los institutos políticos sobre los errores y omisiones en los que han incurrido y mediante las resoluciones del Consejo General del INE se determinan las sanciones aplicables. Aunado a lo anterior, la UTF realiza, mediante los proyectos específicos, trabajos para analizar, desde la perspectiva de género, el contenido de las propuestas de los PAT.

Lo anterior, junto con las opiniones recogidas durante las actividades de capacitación a los partidos políticos en la materia que ocupa, en 2016 y 2017, han permitido detectar las siguientes problemáticas:

A. EN LA PLANEACIÓN Y DISEÑO DE LOS PROGRAMAS ANUALES DE TRABAJO

- ❖ Desconocimiento, por parte de quienes elaboran los PAT y son responsables del desarrollo de actividades, sobre las siguientes materias:
 - Normativa aplicable al Gasto Programado.
 - Documentos básicos partidistas.
 - Planeación estratégica.
 - Perspectiva de género.
 - Derechos político-electorales.
- ❖ Deficiente planeación de PAT derivada principalmente de:
 - Omisión de los elementos mínimos, señalados en el artículo 175 del Reglamento de Fiscalización, que deben incluirse en cada proyecto.
 - Falta de una base estratégica de planeación de los proyectos que se sustente en un diagnóstico de género³⁸ que permita identificar la problemática que enfrentan las mujeres en el ejercicio igualitario de sus derechos político-electorales y, en consecuencia, se dificulta orientar las actividades de los proyectos a su atención.

³⁸ El 81.8% de los Programas Anuales de Trabajo (PAT) carece de diagnóstico de género, el 30.56% presenta objetivos no orientados para atender un problema o necesidad y el 40% omite definir de manera clara las metas, por lo que es necesario colocar metas con objetivos medibles y cuantificables. Información proporcionada por el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización en el marco de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y no Discriminación en la Participación Política, Instituto Nacional Electoral, 25 de junio de 2018.

- Falta de inclusión de la perspectiva de género en el diseño de los proyectos.
 - Definición de objetivos y metas con carencias importantes respecto de su claridad, viabilidad y relevancia para la orientación de los proyectos hacia la obtención de resultados significativos para el adelanto de las mujeres.
 - Incongruencia entre los objetivos, metas e indicadores de los proyectos planteados.
 - Planteamiento de indicadores inadecuados para la medición de los objetivos y resultados de los proyectos a corto, mediano y largo plazo.
 - Privilegiar la realización de actividades únicamente en un subrubro, ya sea capacitación y formación del liderazgo político de las mujeres; investigación, análisis, diagnósticos y estudios comparados; y difusión y divulgación.
 - Realizar actividades sin considerar características específicas de la población objetivo a la que se dirige el proyecto.
 - Presupuestos que no consideran los costos y medias locales, o no integran la totalidad de los gastos necesarios para el desarrollo integral de las actividades.³⁹ Por ejemplo, en localidades rurales donde los gastos de gastos del traslado y los viáticos para acceder a los cursos de capacitación o las actividades del partido son de difícil comprobación.
-
- ❖ Imposición de la Secretaría de Finanzas o de la dirigencia partidista en los temas que componen los proyectos, así como el ejercicio de los recursos en las actividades.
 - ❖ Limitación o condicionamiento al interior de los partidos políticos, respecto de la disposición oportuna de los recursos por parte de la Secretaría de la Mujer u órgano equivalente, para la realización de los proyectos planteados.

B. EN LA EJECUCIÓN Y EJERCICIO DEL GASTO

- ❖ Incumplimiento de los porcentajes mínimos aplicables que deben destinar los partidos políticos para el rubro de CPDLPM.

³⁹Existen obstáculos para que las mujeres acudan a los cursos o capacitaciones, es el caso de las mujeres indígenas quienes en diversas ocasiones no pueden solventar los gastos para recibir este tipo de talleres. Comentario realizado por la representante del Partido de la Revolución Democrática, en el marco de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y no Discriminación en la Participación Política, Instituto Nacional Electoral, 25 de junio de 2018.

- ❖ Realizar actividades que no se consideran como gasto programado carentes de objeto partidista y no vinculadas directamente con el rubro de CPDLPM, de conformidad con el artículo 168 del RF.
- ❖ Contratar actividades que rebasan las 1,500 UMA en un año calendario, con proveedores no registrados en el Registro Nacional de Proveedores del INE, de conformidad con el artículo 356, numeral 2, inciso b) del RF.
- ❖ Contratar personal ponente sin validar que el perfil curricular sea adecuado al tema objeto del contrato.
- ❖ Concentrar la realización de las actividades en el último trimestre del año, sin causa justificada.
- ❖ Omitir presentar total o parcialmente la documentación comprobatoria de las actividades realizadas.
- ❖ Falta de controles para dar seguimiento a los resultados de las actividades, tales como encuestas de entrada/salida, evaluación inicial y final.
- ❖ Omisión o presentación extemporánea de los avisos de modificación de PAT, así como para la realización de actividades vinculadas con el gasto programado.
- ❖ En Proceso Electoral, los partidos políticos descuidan y suspenden las actividades del Gasto Programado y se enfocan a actividades meramente de campaña.
- ❖ Omisión de vigilancia y monitoreo de los eventos, capacitaciones y cursos que llevan a cabo los partidos políticos.
- ❖ Omisión de establecer mecanismos para identificar cuántas de las mujeres que asisten a estos cursos de capacitación, se convierten en candidatas, porque lo ideal es que estos cursos se conviertan en semillero de mujeres que ocuparán los cargos de elección popular.

- ❖ Omisión de realizar una evaluación cualitativa a los partidos políticos del ejercicio del tres por ciento en capacitación y liderazgo político de las mujeres.

2. BUENAS PRÁCTICAS PARA OPTIMIZAR LOS RECURSOS DEL GASTO PROGRAMADO

En resumen, para evitar en la medida de lo posible la imposición de sanciones y favorecer el cumplimiento del gasto en el rubro, en este apartado se presentan recomendaciones orientadas a mejorar la planeación, el diseño de los proyectos, la ejecución de las actividades y el ejercicio del recurso económico destinado a la CPDLPM, de manera que, con las acciones que realicen los partidos políticos, se fortalezca el logro de los resultados planteados para los fines del recurso en cuestión.

A. EN LA PLANEACIÓN Y DISEÑO DE LOS PROGRAMAS ANUALES DE TRABAJO

- ❖ Formular los PAT con perspectiva de género, lo cual implica que se desagregue a la población beneficiaria por sexo y edad, que se desarrollen proyectos que no reproduzcan estereotipos de género, que sean proyectos que contribuyan a la reducción de la desigualdad y el ejercicio de los derechos político-electorales, y asegurar que efectivamente se orienten hacia el logro de la igualdad sustantiva. Además, debe redactarse con lenguaje incluyente.
- ❖ Realizar el diseño del PAT con base en una planeación estratégica, táctica y operativa para el ejercicio de los recursos, así como orientada a resultados. Una base de esta planeación es realizar diagnósticos integrales sobre la desigualdad, discriminación y violencia por motivos de género en el mismo partido político, en la cual se identifiquen los obstáculos y desventajas que enfrentan las mujeres para ejercer liderazgos.
- ❖ Definir líneas estratégicas tanto en los Comités Ejecutivos Nacionales como en los Comités Directivos Estatales para el diseño del PAT para la CPDLPM, que respondan a los problemas de desigualdad de género detectados en los diagnósticos.

- ❖ Definir objetivos claros, viables y estratégicos para la igualdad de género y el adelanto de las mujeres en el ejercicio de sus derechos.
- ❖ Alinear la justificación, objetivo, meta e indicadores del PAT con la finalidad del rubro de CPDLPM, así como con las problemáticas detectadas en los diagnósticos integrales sobre la situación de desigualdad, discriminación y violencia de género.
- ❖ Privilegiar ciclos de formación de mediano y largo plazo orientadas a contribuir de manera sustantiva en la atención de las problemáticas y necesidades de las mujeres respecto del pleno ejercicio de sus derechos político-electorales, con el fin de generar un impacto en el fortalecimiento de los liderazgos y el empoderamiento político de las mujeres.
- ❖ Generar vínculos con instituciones académicas, asociaciones de la sociedad civil especializadas en género y/o despachos especializados, para el diseño de las actividades y temas del programa anual de trabajo. Esta asesoría deberá realizarse con recurso de gasto ordinario, por ningún motivo con recursos del Gasto Programado.
- ❖ Establecer la obligatoriedad de que las personas responsables de elaborar los PAT para la CPDLPM reciban o acrediten una formación al momento de ingresar sobre qué es la perspectiva de género y cómo se debe impactar en el PAT y que anualmente se reciba una actualización sobre temáticas vinculadas a las brechas de género, el componente interseccional de la perspectiva de género, entre otros. Esta formación y/o actualización deberá realizarse con recurso de gasto ordinario, por ningún motivo con recursos del Gasto Programado.
- ❖ Utilizar los mecanismos y formatos diseñados por la UTF para capturar y presentar el Programa Anual de Trabajo.
- ❖ Realizar procesos de transversalización de la perspectiva de género en las estructuras partidistas internas.
- ❖ Diseñar estrategias que propicien el ejercicio de los recursos del gasto programado a lo largo del año, sobre todo en los años de proceso electoral.

- ❖ Equilibrar el gasto entre los diferentes subrubros contemplados para la CPDLPM, de tal suerte que exista una estrategia conjunta que potencialice el impacto de cada uno y no solo actividades aisladas.

B. EN EL SUBRUBRO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES

- ❖ Considerar que la capacitación tiene el potencial de posicionar a los partidos políticos como instituciones políticas comprometidas con el liderazgo político de las mujeres, la igualdad de derechos, la paridad entre géneros y la no discriminación y que brinda al partido ventajas estratégicas para la competencia política que incluya a las mujeres.
- ❖ Identificar con precisión a la población objetivo a la que dirigen sus acciones para establecer la estrategia de capacitación y los temas de ésta, atendiendo a la pertinencia en función al contexto (militantes, simpatizantes, población en general, mujeres jóvenes, adultas mayores, en situación de discapacidad, indígenas, afromexicanas, o pertenecientes a grupos de atención prioritaria).
- ❖ Llevar a cabo procesos de selección rigurosos para asegurar que el perfil de las personas capacitadoras sea adecuado al objeto de ésta (acreditable en su currículum) y cuidar que el contenido de las exposiciones sea sustantivo, documentado y actualizado sobre los temas de igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, así que como sus dinámicas y lenguaje sea incluyente, no sexista, ni discriminatorio.
- ❖ La capacitación que se brinde a las mujeres por los partidos políticos debe ser asumida como un ciclo de formación de competencias, es decir, continua, sostenida y prolongada en el tiempo, con el fin de fortalecer los liderazgos y el empoderamiento político de las mujeres.
- ❖ Los programas de capacitación deberán contener temas relativos al marco jurídico nacional e internacional para la protección de los derechos humanos de las mujeres, estrategias para el logro de la igualdad entre hombres y mujeres, negociación y resolución de conflictos con perspectiva de género, monitoreo de acceso al poder con enfoque de género y transversalización de la perspectiva de género y de los derechos humanos de las mujeres.

- ❖ Generar un sistema de expediente único de las personas beneficiarias de la capacitación, a fin de que el mismo permita rastrear la evaluación cualitativa y de largo plazo de la capacitación que reciban. La presentación de dicho expediente será necesario como comprobación de la actividad.
- ❖ Establecer programas de mentorías⁴⁰, consistentes en proporcionar asesorías individualizadas en forma periódica y sistemática a aquellas mujeres que quieren y tienen altas posibilidades de acceder a espacios de toma de decisión en el corto plazo. Estas mentorías pueden ser presenciales o virtuales y deben realizarse de forma periódica, al menos cada tres meses.
- ❖ Crear planes de formación integral de capacitación para mujeres líderes políticas (asertividad, oratoria, gestión y políticas públicas) que contribuya a reforzar liderazgos transformadores de las mujeres en política, incluyendo un plan específico para mujeres indígenas, mujeres víctimas de violencia, mujeres adultas mayores, mujeres jóvenes, mujeres afromexicanas, mujeres con discapacidad, mujeres parte de la comunidad LBGTTTIQ y mujeres rurales.
- ❖ Generar un programa de asesoramiento en el cual las mujeres que por primera vez participan en política puedan alcanzar el mismo nivel de aquellas con más experiencia, esto con la finalidad de asegurar una mayor participación de éstas en puestos de decisión.
- ❖ Asegurar educación formal para las mujeres políticas, para lo cual podrán celebrarse convenios con diversas universidades de reconocido prestigio nacional e internacional. Estas capacitaciones deberán celebrarse por lo menos una vez al año.
- ❖ Crear un mecanismo para que las mujeres no encuentren dificultades económicas, tecnológicas y de movilidad para acceder a cualquier capacitación, curso, taller que se imparta por los partidos políticos en ejercicio del presupuesto asignado.

⁴⁰ El objetivo de los programas de mentorías es aplicar de forma práctica los conocimientos, habilidades y competencias que adquieran en la capacitación ordinaria a fin de avanzar en el ámbito de la participación política de las mujeres.

- ❖ Implementar herramientas para que tanto hombres como mujeres sean sensibilizados y capacitados en temas relativos a violencia política y violencia política en contra de las mujeres en razón de género.

C. EN EL SUBRUBRO DE INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS, DIAGNÓSTICOS Y ESTUDIOS COMPARADOS

- ❖ Llevar a cabo diagnósticos integrales con el propósito de ampliar el conocimiento respecto de asuntos relevantes para la igualdad de género en el ámbito político como las condiciones para la plena realización de los derechos políticos de las mujeres, la igualdad en el ejercicio de dichos derechos, la violencia política en contra de las mujeres, la influencia de los medios de comunicación en la imagen de las mujeres en política, entre otros.
- ❖ Desarrollar diagnósticos para conocer los problemas u obstáculos que enfrentan las mujeres para ejercer sus derechos políticos-electorales, lo que les permitirá identificar el estado de las cosas que se pretenden modificar o solucionar y por lo tanto focalizar la capacitación. Particularmente, investigar las barreras al interior de la militancia y los órganos de gobierno de los partidos.
- ❖ Generar investigación en relación con la transversalización de la perspectiva de género y de los derechos humanos de las mujeres. Es decir, sobre las estrategias para que las diversas áreas que diseñan y ejecutan políticas públicas cuenten con este enfoque.
- ❖ Delimitar el alcance de la investigación, análisis, diagnóstico y/o estudio comparado, a fin de integrar las herramientas y recursos disponibles para su realización.
- ❖ Privilegiar actividades de investigación sobre los temas vinculados a los derechos políticos de las mujeres de manera seriada o concatenada por encima de investigaciones aisladas.
- ❖ Realizar un protocolo de investigación previo y un dictamen de consistencia académica emitido por instituciones educativas o de investigación reconocidas.

- ❖ Generar un diagnóstico en relación con los obstáculos que existen para las mujeres al interior de los partidos políticos y construir un proyecto de investigación que contenga mecanismos claros para eliminarlos.
- ❖ Llevar a cabo estudios comparados sobre el cumplimiento de la paridad horizontal y vertical en los diversos niveles de gobierno en México y en diversos países, esto con la finalidad de detectar mejores prácticas que puedan aplicarse en México.
- ❖ Desarrollar una investigación sobre las medidas que pueden tomar los partidos políticos para combatir la desigualdad de género en el proceso de selección de candidatas y candidatos.
- ❖ Generar investigaciones, estudios, debates y herramientas para promover la eficacia de las acciones afirmativas a favor de las mujeres, en los sistemas electorales y al interior de los partidos políticos.
- ❖ Elaborar un diagnóstico de las condiciones en que las mujeres están llegando a los puestos de decisión con respecto a las de los hombres, y determinar qué tanto incide en ello la existencia de mecanismos para lograr una conciliación entre la vida laboral y personal, los temas relativos al cuidado de las y los hijos y la doble carga en las actividades domésticas.
- ❖ Crear una investigación o estudio en relación con la prevención y erradicación del acoso y hostigamiento laboral y sexual al interior de los partidos políticos o como medida que restringe el acceso y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.
- ❖ Impulsar investigaciones sobre el comportamiento de los medios de comunicación con relación a la participación política de las mujeres y generar herramientas para combatir la discriminación y promover la igualdad de género en los mismos.
- ❖ Incentivar investigaciones específicas sobre género y participación política de mujeres pertenecientes a la comunidad LBGTTHIQ, mujeres rurales, mujeres víctimas de violencia, mujeres adultas mayores y mujeres jóvenes.

- ❖ Generar diagnósticos en relación a las condiciones en que las mujeres están llegando a los puestos de decisión con respecto de los hombres, que tanto incide en ello la existencia de mecanismos para lograr una conciliación entre la vida laboral y personal, los temas relativos al cuidado de los hijos y la carga en las actividades domésticas.
- ❖ Elaborar un diagnóstico en relación con los casos de violencia política en contra de las mujeres por razón de género y la justicia electoral, que se han documentado a lo largo de los procesos electorales recientes.
- ❖ Realizar un estudio comparado respecto de la existencia de brechas salariales en los puestos que ocupan las mujeres al interior de los partidos políticos con respecto a los cargos que son ocupados por hombres.
- ❖ Establecer investigaciones sobre brechas de género en el acceso a los recursos de precampaña y campaña.
- ❖ Crear observatorios en los que se monitoree cómo se posicionan las mujeres militantes al interior de los mismos registrar los obstáculos y los mecanismos adecuados para remediarlos.
- ❖ Desarrollar un diagnóstico sobre el nivel de igualdad de género en el ámbito político, con el objeto de identificar, y en última instancia eliminar, toda práctica o regla que pueda directa o indirectamente socavar la posición de las mujeres.
- ❖ Impulsar la creación de una agenda política de género, con un enfoque de emancipación, que incluya una serie de ejes prioritarios a fin de lograr la transformación de las relaciones de inequidad entre hombres y mujeres al interior de los partidos políticos.
- ❖ Generar una investigación que contenga una base de datos de las mujeres que se presentan como candidatas en las elecciones y que no obtienen éxito, a fin de retenerlas en actividades y puestos de los partidos políticos y con ello fomentar su interés en presentarse en una fecha futura.

- ❖ Especificar en el PAT el perfil de la persona o grupo investigador, así como un cronograma donde se fijen los plazos y fechas específicas para la conclusión de la investigación y su registro oportuno ante el INDAUTOR.
- ❖ Presentar la solicitud de registro ante el INDAUTOR de las actividades de investigación realizadas en el ejercicio correspondiente.

D. EN EL SUBRUBRO DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN

- ❖ Divulgación de mensajes dirigidos a sensibilizar a las personas respecto de la importancia de la participación política de las mujeres con la información generada en las actividades de capacitación y formación para el liderazgo político de las mujeres.
- ❖ Creación de una campaña de difusión del ejercicio del poder sin violencia hacia las mujeres, en la cual se deberán promover mecanismos para prevenir y erradicar la violencia política en su contra.
- ❖ Generar una campaña para difundir la necesidad de contar con acciones afirmativas en favor de candidaturas de mujeres indígenas, mujeres afromexicanas, mujeres con discapacidad, mujeres víctimas de violencia, mujeres adultas mayores, mujeres jóvenes y mujeres rurales.
- ❖ Crear una campaña de difusión a favor de las cuotas de género al interior de los partidos políticos a fin de garantizar el mayor número de mujeres en los puestos de decisión.
- ❖ Elaborar y divulgar mensajes específicos dirigidos a sensibilizar personas y a modificar actitudes y comportamientos excluyentes o discriminatorios, fortaleciendo la posición, la imagen y el reconocimiento de las mujeres ante la opinión pública, así como combatiendo los estereotipos y los obstáculos a la participación política y económica de las mujeres.
- ❖ Impulsar una campaña de difusión en la que se explique qué son los estereotipos de género y cuál es el impacto negativo de los mismos en la participación política de las mujeres.

- ❖ Promover una opinión pública favorable sobre la participación de las mujeres e informar a la ciudadanía, a través de mensajes breves y con enfoque de derechos, sobre la importancia del empoderamiento político y económico de las mismas.
- ❖ Crear un mecanismo que les permita monitorear a los medios de comunicación durante periodos electorales para detectar las diferencias de trato hacia las mujeres respecto del que reciben los hombres y, consecuentemente, generar estrategias que contrarresten tratos discriminatorios.
- ❖ Impulsar la difusión de las nuevas formas de masculinidades a través de la elaboración de spots que se reproduzcan en los principales medios de comunicación, en los que se incluya a hombres como voceros.⁴¹
- ❖ Establecer instrumentos de evaluación en las actividades de difusión y divulgación que permitan medir el grado de aceptación de la información contenida.
- ❖ Privilegiar el desarrollo de nuevos temas o productos de divulgación, más que reimprimir actividades de ejercicios anteriores.
- ❖ Presentar la solicitud de registro ante el INDAUTOR de las actividades de difusión y divulgación realizadas en el ejercicio correspondiente.

A continuación, se muestran algunos ejemplos reales de buenas y malas prácticas detectadas en la revisión de los Informes Anuales presentados por los partidos políticos, respecto al uso, destino y aplicación de los recursos del Gasto Programado.

⁴¹ En Colombia, en el marco del Programa Conjunto de género financiado por el Fondo para el logro de los Objetivos del Milenio, se implementó una estrategia de comunicación educativa con un fuerte enfoque en masculinidades que llegó a múltiples poblaciones, desde funcionarios públicos, organizaciones de la sociedad civil, hasta un público más amplio a través de una campaña en medios de comunicación masiva. En el marco de la campaña y bajo el eslogan "nos toca", voceros hombres, personajes reconocidos a nivel nacional, realizaron piezas comunicativas contra la violencia basada en género. De esa forma, se promovieron masculinidades no violentas comprometidas con el cambio y la transformación social e institucional de los estereotipos de género, sacando el problema de la violencia basada en género de la esfera privada y llevándolo al debate público.

ASPECTOS A EVALUAR		MALAS PRÁCTICAS	BUENAS PRÁCTICAS
Planeación del Programa Anual de Trabajo para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres	Aplicación del recurso	Destinar el 100% del recurso del gasto para la CPDLP a un subrubro de gasto en particular, ya sea: 1. Capacitación y formación para el liderazgo político de las mujeres 2. Investigación, Análisis, Diagnósticos y Estudios Comparados 3. Divulgación y Difusión	Diversificar el porcentaje del recurso del gasto para la CPDLP, entre los diferentes subrubros de gasto: 1. Capacitación y formación para el liderazgo político de las mujeres 2. Investigación, Análisis, Diagnósticos y Estudios Comparados 3. Divulgación y Difusión
	Programación de actividades	Programar las actividades del PAT en el último trimestre del año y no aplicar la totalidad de los recursos.	Programar durante todo el año, las actividades del PAT, a fin de informar trimestralmente el avance y la aplicación de los recursos de cuando menos el porcentaje del 3%.
	Presentación del PAT	Presentar el PAT fuera de los plazos de ley, u omitir su presentación.	Presentar el PAT en tiempo y forma, es decir, dentro de los 30 días siguientes a la aprobación del Financiamiento Público del ejercicio.
	Avisos y modificaciones	No presentar los avisos de modificación de los PAT ni dar aviso de la realización de las actividades.	Presentar en tiempo y forma (dentro de los 15 días posteriores) las modificaciones realizadas a los PAT y dar aviso a la UTF con al menos 10 días de anticipación al evento y 5 días en caso de tiraje, de forma que permita la verificación por parte de la autoridad
	Estructura del PAT	Cancelar los eventos el día de su realización o días previos, sin dar aviso a la autoridad.	Dar aviso a la autoridad de la cancelación de un evento, en el momento en que el partido lo determine. Presentar un PAT por cada rubro de gasto: <ul style="list-style-type: none"> • Actividades específicas • Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres • Liderazgos juveniles, en las entidades federativas que lo regulen

ASPECTOS A EVALUAR		MALAS PRÁCTICAS	BUENAS PRÁCTICAS
Planeación del Programa Anual de Trabajo para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres	Estructura del PAT	No alinear el objetivo de los proyectos con el objetivo del rubro de CPDLP, señalado en el artículo 177, numeral 1, inciso b), en relación con el 174, numeral 1, inciso b) del RF.	Planear los proyectos del PAT, considerando los objetivos y fines establecidos en el artículo 177, numeral 1, inciso b), en relación con el 174, numeral 1 inciso b) del RF, así como con los fines partidistas señalados en el artículo 41, Base I, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
		Presentar el PAT sin la totalidad de los elementos señalados en el RF y Lineamientos del Gasto Programado.	Presentar el PAT con la totalidad de los elementos señalados en el RF y los Lineamientos del Gasto Programado: 1. Partido político 2. Nombre del PAT 3. Nombre del proyecto 4. Objetivo, metas e indicadores 5. Alcance y beneficios del proyecto 6. Actividades y tareas 7. Fechas o periodos de ejecución 8. Delimitación geográfica 9. Número de personas beneficiadas 10. Presupuesto 11. Cronograma 12. Justificación 13. Resultados específicos o entregables 14. Persona responsable de la organización y ejecución 15. Persona responsable del control y seguimiento
		Integrar los proyectos del PAT sin una justificación, o en su caso, constituirla sin un diagnóstico o detección de necesidades, alineadas con el objetivo del gasto.	Integrar en los proyectos del PAT, una justificación o diagnóstico que permita identificar la situación de las mujeres en el ámbito político.

ASPECTOS A EVALUAR		MALAS PRÁCTICAS	BUENAS PRÁCTICAS
Planeación del Programa Anual de Trabajo para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres	Estructura del PAT	Presentar el PAT sin apearse a los formatos de acta constitutiva establecida por la UTF.	Capturar los proyectos del PAT en el aplicativo establecido por la UTF a fin de generar los respectivos formatos de acta constitutiva.
	Restricciones del gasto	Planear proyectos con temas restringidos en el artículo 168 del RF.	Planear proyectos en temas que no recaigan en los supuestos señalados en el artículo 168 del RF: <ul style="list-style-type: none"> • Actividades ordinarias permanentes. • Promoción del partido político • Evaluar las condiciones del partido o preparar a sus dirigentes para cargos directivos • Gastos relacionados con las campañas. • Aniversarios, congresos confines administrativos o de organización interna • Pago de hipotecas de oficinas • Gastos operativos
	Gastos sin objeto partidista	Realizar eventos en los que se conjuntan celebraciones tales como festejos navideños, posadas o festejos por el día de las madres, o bien realizar erogaciones por concepto de entrega de estudios clínicos (mastografías), cursos de superación personal o espiritualidad, entrega de cosméticos bajo el argumento que beneficiar a las mujeres.	Realizar únicamente erogaciones que se encuentren totalmente vinculadas al cumplimiento de las actividades de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres en torno a los temas previstos en el artículo 170, numeral 2 del RF, así como a las finalidades de los partidos políticos, señaladas en el artículo 41, Base I, segundo párrafo de la CPEUM.
	Cuentas presupuestales	Omitir realizar los registros contables en las cuentas presupuestales del SIF, así como la omisión de presentar el Estado de Situación Presupuestal.	Realizar el registro contable en las cuentas presupuestales del SIF a fin de conocer con exactitud el presupuesto aprobado, por ejercer, el devengado y el ejercido, que permita al cierre del ejercicio preparar el Estado de Situación Presupuestal.

ASPECTOS A EVALUAR		MALAS PRÁCTICAS	BUENAS PRÁCTICAS
Planeación del Programa Anual de Trabajo para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres	Personal ponente	Contratar personal ponente sin la experiencia y/o conocimiento en el tema a impartir. Contratar a un diputado/a para impartir un curso en materia legislativa.	Contratar personal calificado y competente para cada tema de exposición. Contratar a una persona académica con experiencia legislativa para impartir un curso en la materia. Asesorarse con personas expertas para la construcción e integración del material y contenido de capacitación, atendiendo a la población objetivo.
	Material de capacitación	Elaborar el material y contenido del evento sin considera el tema a impartir ni la población objetivo.	
	Seguimiento de proyectos	No darles seguimiento a los proyectos del PAT, constituyendo eventos aislados.	Planear proyectos secuenciales que permitan darle seguimiento a los objetivos y resultados.
	Ejecución de proyectos	Omitir la entrega de las muestras correspondientes a los eventos de capacitación o tareas editoriales, al personal de la UTF encargado de verificar la realización de los eventos	Entregar las muestras de los eventos de capacitación o tareas editoriales, al personal de la UTF encargado de verificar su realización; o en su caso, presentarlas ante la UTF, cuando los eventos no se hubiesen sido verificados.
Capacitación y formación para el liderazgo político de las mujeres	Generar conocimientos, habilidades y actitudes de adelanto en las mujeres, que favorezcan el desarrollo de competencias para su participación política y la defensa de sus derechos políticos	Foro para evaluar políticas públicas en materia de seguridad nacional.	Foro para evaluar los obstáculos que encuentran las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos al interior del partido político.
		Eventos dirigidos a presidentes/as municipales y regidores/as para el desempeño de sus funciones.	Eventos de capacitación para mujeres presidentas municipales electas por primera vez en acciones y temas establecidos en el artículo 186 del RF.
		Eventos para prevenir problemas de salud que atañen a las mujeres.	Eventos para evaluar la participación política de las mujeres con una visión interseccional
		Eventos para el fortalecimiento empresarial de mujeres líderes comunitarias	Eventos para el fortalecimiento político de mujeres líderes comunitarias
		Eventos de capacitación durante los Procesos Electorales a los cuales acuden como invitados candidatas o candidatos que utilizan el espacio para dar a conocer sus propuestas.	Eventos de capacitación durante los Procesos Electorales a los cuales acuden como invitados candidatas o candidatos sin que estos realicen expresiones en favor de su campaña.

ASPECTOS A EVALUAR		MALAS PRÁCTICAS		BUENAS PRÁCTICAS	
Capacitación y formación para el liderazgo político de las mujeres	Propiciar la igualdad de oportunidades para el desarrollo político, el acceso al poder público y la participación en los procesos de toma de decisiones	Curso de Imagen Personal	Eventos dirigidos a representantes de casilla para la defensa del voto en la jornada electoral.	Curso para definir una Imagen Política y/o Branding o Marca política	Eventos dirigidos para prevenir la violencia política contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos político electorales durante los comicios
		Eventos que fomenten la creación de grupos o redes de mujeres para su empoderamiento económico.			Eventos que fomenten la creación de grupos o redes para impulsar el liderazgo político de las mujeres
		Eventos para la construcción de redes digitales para posicionar mensajes del partido político o sus candidaturas.			Eventos para la construcción de redes digitales de mujeres para el combate a los estereotipos de género y las estrategias para enfrentar la violencia política en el espacio digital.
	Propiciar la igualdad de oportunidades para el desarrollo político, el acceso al poder público y la participación en los procesos de toma de decisiones	Eventos (curso, taller, seminario, etc.) con el objetivo de empoderar económicamente a las mujeres mediante el autoempleo o en materia de Ecología y Medio Ambiente		Eventos (curso, taller, seminario, etc.) con el objetivo de empoderar políticamente a las mujeres mediante la emancipación, promoviendo transformaciones personales para la incidencia política.	
		Preparar a las dirigentes del partido político para ocupar cargos directivos, toda vez que se trata de una restricción estipulada en el artículo 168 del RF. Lo anterior responde a que el recurso del Gasto Programado está dirigido a generar las condiciones para que las mujeres lleguen a los cargos directivos, y debido a que las dirigentes ya están ahí, su preparación debe hacerse con cargo al presupuesto ordinario de sus respectivos partidos políticos.		Formular actividades que promuevan la incorporación de las mujeres en la vida política.	
		Posicionar al partido político o a sus candidatos con recursos provenientes del gasto programado.		Incrementar los conocimientos de mujeres jóvenes, mediante capacitación en materia política y liderazgo político.	

ASPECTOS A EVALUAR		MALAS PRÁCTICAS	BUENAS PRÁCTICAS
Investigación, Diagnósticos y Estudios Comparados	<p>Visibilizar las circunstancias de las mujeres en el ámbito político, los obstáculos que enfrentan dentro de los partidos políticos para la participación política y de cultura organizacional</p>	Investigación de la concientización del uso del agua en la entidad federativa.	Investigación sobre la participación política de las mujeres jóvenes y su posicionamiento político en mandos directivos al interior del partido político.
		Análisis de las políticas públicas para combatir la pobreza del país o de una entidad federativa.	Diagnóstico y panorama de la violencia política contra las mujeres al interior del partido, en el ejercicio del cargo o en entidades o municipios concretos.
		Elaborar investigaciones que no cumplan la metodología señalada en el artículo 188, numeral 2 del RF.	<p>Elaborar investigaciones, análisis, diagnósticos y estudios comparados con una estructura de contenido cuya metodología garantice los estándares de una investigación académica, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introducción • Justificación e importancia de la investigación • Objetivos de la investigación • Planteamiento y delimitación del problema • Marco teórico y conceptual de referencia • Formulación de hipótesis • Pruebas empíricas o cualitativas de las hipótesis • Conclusiones y nueva agenda de investigación • Bibliografía.
		Presentar investigaciones que contienen plagio total o parcial.	Realizar investigaciones de autoría propia e inédita.
Divulgación y Difusión	Realización de impresos relativos a la	Presentar investigaciones y su producto editorial sin el registro ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor; o en su caso, presentar instrumentos notariales que certifiquen el documento de investigación.	Presentar ante la UTF, investigaciones y su producto editorial, debidamente registradas ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, de acuerdo con el artículo 164 del RF.
		Impresión de un libro para la ciudadanía en materia del cuidado de recursos naturales y medio ambiente.	Impresión de un libro en materia avances y retos en la participación política de las mujeres.

ASPECTOS A EVALUAR		MALAS PRÁCTICAS	BUENAS PRÁCTICAS
	<p>promoción y acceso a la información de los derechos políticos y los obstáculos que enfrentan las mujeres dentro de los partidos políticos para la participación política y de cultura organizacional</p>	Impresión de una revista referente a los derechos laborales y propuestas de autoempleo.	Impresión de una revista referente a los derechos de las mujeres (político-electoral) y propuestas de acción para su defensa y garantía.
		Trípticos que difundan acciones para el cuidado de casillas dentro de los procesos electorales.	Trípticos que difundan lo que se puede considerar violencia política contra las mujeres tanto al interior de los partidos políticos, como en la precampaña, campaña y el ejercicio del cargo y mecanismos de denuncia.
		Impresión de autobiografías de líderes partidistas.	Impresión de libro con el "Protocolo del Partido para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género"
		Impresión de trípticos y pulseras del cáncer de mama	Impresión de trípticos visibilizando los obstáculos que enfrentan las mujeres que participan en la vida política, las estrategias que ha establecido el partido para superarlas y las vías a las que pueden recurrir para denunciarlos o atenderlos.
		Reimpresión de los mismos contenidos editoriales durante varios ejercicios.	Realizar contenidos editoriales inéditos en cada ejercicio.
		Presentar actividades editoriales y audiovisuales, sin el registro ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor; o en su caso, presentar instrumentos notariales que certifiquen la obra editorial.	Presentar ante la UTF, actividades editoriales y audiovisuales, debidamente registradas ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, de acuerdo con el artículo 164 del RF.

3 BUENAS PRÁCTICAS REALIZADAS EN OTROS PAÍSES EN MATERIA DE DIFUSIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA FORTALECER EL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES	
Argentina	<p>El partido <i>Afirmación para una República Igualitaria</i> (ARI) contempla la igualdad entre los géneros como uno de los temas que deben prevalecer en sus programas de formación política partidaria. En el año 2004 decidió que sus programas formativos fueran diseñados por el Instituto de Formación Cultural y Política “Hannah Arendt”, un espacio de formación que se propone ligar el ámbito académico con la acción política y que cuenta con integrantes especialistas en temáticas de género, así como con experiencia en actividad política.</p> <p>Esta práctica ha sido destacada porque liga la igualdad de género con otras áreas de interés del partido y porque las capacitaciones se dirigen a hombres y a mujeres, lo que contribuye a posicionar el tema entre todas las personas del Partido, además de que les vincula con una institución que ofrece cursos especializados en materia de género.</p> <p>También es preciso destacar que los contenidos del curso son diseñados por profesionistas con un perfil adecuado y la modalidad de la capacitación implica 20 sesiones, tiempo que permite ir más allá de una charla sobre las temáticas que se abordan en el curso.</p> <p>En el año 2004, las capacitaciones fueron replicadas a nivel local y el Instituto de Formación Cultural y Política “Hannah Arendt” aún colabora con el ARI en procesos formativos dirigidos a sus integrantes.⁴²</p>
Brasil	<p>El programa de capacitación política para mujeres del Partido Social Demócrata de Brasil (PSDB) se reconoce como una buena práctica en virtud de que se integró por cuatro módulos, el primero de ellos “La mujer y la política” para incentivar el interés de las mujeres para participar políticamente; el segundo “La mujer y el estado” abordando la importancia de que las mujeres participen en espacios de poder y toma de decisiones; el tercero “La mujer y la ciudadanía” aborda los derechos específicos de las mujeres. El cuarto módulo “La mujer y el Partido Social Demócrata de Brasil” se aboca a invitar a las mujeres a participar en el partido.</p>

⁴² Partido Afirmación para una República Igualitaria. Memoria 2004, recuperado de https://www.pjn.gov.ar/cne/secelec/document/balances/563-589-16-ari_ba04.pdf
 Llanos, Beatriz & Sample Kristen (2008). Del dicho al hecho: manual de buenas prácticas para la participación de mujeres en los partidos políticos latinoamericanos. Idea Internacional. Recuperado de <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/del-dicho-al-hecho.pdf>

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES	
	<p>La experiencia ha sido destacada porque se elaboraron materiales didácticos, dinámicas participativas y se capacitó a mujeres multiplicadoras de los talleres. El programa y los materiales fueron diseñados por profesionistas con amplios conocimientos del sistema político del país, en materia de género, así como de diseño de programas formativos. Es decir, el perfil de las personas que diseñan e imparten las capacitaciones es un aspecto que se considera clave para lograr resultados positivos.</p> <p>IDEA Internacional estima que se trata de un programa formativo que ha contribuido al empoderamiento de las mujeres militantes del PSDB, además de que ha permitido crear redes de mujeres interesadas en la participación política.⁴³</p>
Guatemala	<p>En el año 2000, al constatar que la militancia femenina en el partido llegaba apenas al 3%, la Coordinadora Nacional de la Mujer elaboró una estrategia para atraer más militantes basada en tres vértices: afiliación, capacitación y cuotas de participación dentro de los comités ejecutivos de los lugares donde el partido tenía presencia y en cargos a elección popular.</p> <p>Para la afiliación, se organizaron grupos de mujeres en los municipios, se les capacitó sobre sus derechos y se ofreció asesoría legal en temas específicos, como por ejemplo la violencia intrafamiliar. La premisa fue que, al adquirir el acompañamiento del partido, habría una predisposición a afiliarse. Una vez afiliadas, se continuó con la capacitación de las mujeres en el área de participación política. Paralelamente, se trabajó para que, dentro de los Comités Ejecutivos Departamentales y Municipales, participen más mujeres, replicando la organización en todos los niveles.</p> <p>Para el año 2006, la Coordinadora Nacional de la Mujer contabilizó que de 20% a 30% de líderes eran mujeres, una masa crítica que permitió negociar con el líder del partido la participación de al menos doce de ellas en puestos ganadores para cargos de elección popular en las elecciones del año 2007.</p> <p>Esta medida fue aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional y por la Asamblea Nacional: se logró que, en la campaña electoral 2007, diecisiete mujeres fueran postuladas en puestos ganadores.</p>

⁴³ Llanos, Beatriz & Sample Kristen (2008). Del dicho al hecho: manual de buenas prácticas para la participación de mujeres en los partidos políticos latinoamericanos. Idea Internacional. Recuperado de <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/del-dicho-al-hecho.pdf>

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES	
	Finalmente, se trasladó al Comité Ejecutivo Nacional la propuesta de una reforma de Estatutos del partido que fue aprobada en mayo de 2007 en Asamblea Nacional y por la que se incluyó la cuota del 40% como mínimo de mujeres para puestos en cargos internos (Comité Nacional y Comités Departamentales y Municipales) y en cargos a elección popular. ⁴⁴
Indonesia	Se creó la Asamblea Partidista Política Femenina de Indonesia (Kaukus Perempuan Politik Indonesia, KPPI), una red interpartidaria de mujeres políticas. Desde su inicio, en el año 2000, la KPPI comenzó como un esfuerzo para aumentar el liderazgo de las mujeres dentro de los partidos políticos y los cargos públicos, pero con la ayuda de organizaciones como el Instituto Nacional Demócrata, se ha convertido en una organización nacional con representación en 22 provincias. La asamblea partidista fue efectiva para propugnar un aumento de la cuota de candidatas al 30% para las elecciones de abril de 2009 y realizó recientemente capacitaciones conjuntas con el Ministerio Indonesio de Acceso de la Mujer al Poder en varias provincias. ⁴⁵

INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS, DIAGNÓSTICOS Y ESTUDIOS COMPARADOS	
Bolivia	<p>En Bolivia los partidos políticos construyeron una “agenda política desde las mujeres” con un enfoque de emancipación, que incluye una serie de ejes prioritarios que plantean la necesidad de despatriarcalizar el Estado a fin de transformar las relaciones de inequidad entre hombres y mujeres.</p> <p>Los ejes de la agenda política en favor de las mujeres consisten en 5 puntos fundamentales, que pueden ser fácilmente asimilados por tomadoras de decisión para transformar las relaciones de inequidad entre hombres y mujeres:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Participación política y su profundización. 2. Autonomía del cuerpo (derechos sexuales y derechos reproductivos). 3. Autonomía económica. 4. Violencia contra las mujeres.

⁴⁴ Llanos Beatriz, Kristen Sample, Del dicho al hecho, manual de buenas prácticas para la participación de mujeres en los partidos políticos latinoamericanos, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Perú, 2008, Pág. 30

⁴⁵ Democracia y el Desafío del Cambio: Una Guía Para Aumentar la Participación Política de las Mujeres, Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, Washington, 2010, Pág. 134, consultado en https://www.ndi.org/sites/default/files/Democracy_and_the_Challenge_of_Change_esp.pdf

INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS, DIAGNÓSTICOS Y ESTUDIOS COMPARADOS	
	<p>5. Medios de comunicación y los sistemas simbólicos de reproducción social.</p> <p>Esta agenda fue presentada a los líderes de los principales partidos políticos, logrando compromisos para incluirla en los programas de sus partidos. Para la construcción de las leyes y de las campañas que se desarrollaron, se tuvo el apoyo del Fondo de Igualdad de Género de ONU Mujeres y de la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo.</p> <p>Se contó también con la alianza de muchas organizaciones como Idea Internacional y OXFAM Bolivia.⁴⁶</p> <p>Asimismo, propusieron crear una norma marco que exige la transformación en las relaciones entre mujeres y hombres, vinculada al empoderamiento político de las mujeres. Esta norma se refiere a medidas especiales temporales, sistemas electorales coherentes con el propósito paritario, la supervisión de los organismos de gestión electoral para garantizar el financiamiento de la política y la legislación electoral correspondiente. Asimismo, recoge el principio de la igualdad y no discriminación, la necesidad de eliminar estereotipos y prejuicios por razón de género.⁴⁷</p>
Ghana	<p>En Ghana un grupo de partidos políticos tuvo como objetivo mantener una base de datos de mujeres que se presentaron a elecciones y que no tuvieron éxito, para retenerlas en actividades y puestos de los partidos y para fomentar su interés en presentarse en una fecha futura.⁴⁸</p> <p>En ese mismo sentido, en Ghana los partidos políticos han declarado que intentarán retener a las actuales parlamentarias en futuras elecciones y garantizar que una mujer remplace a una mujer en el cargo en el caso de quedar vacante.⁴⁹</p>

⁴⁶ Seminario Internacional, Profundización de la Democracia Paritaria, Órgano Electoral Plurinacional/Tribunal Supremo Electoral, ONU Mujeres, La Paz, Bolivia, 2016. Pág. 95.

⁴⁷ Ídem, Pág. 36.

⁴⁸ Ghana Web, Parties Issue Recommendations in Favour of Women in Governance ('Los partidos emiten recomendaciones a favor de las mujeres en el gobierno'), disponible en <http://www.ghanaweb.com>, consultado en Empoderando a las mujeres para el fortalecimiento de los partidos políticos. Una guía de buenas prácticas para promover la participación política de las mujeres, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Instituto Nacional Demócrata, 2011, Pág. 26.

⁴⁹ Empoderando a las mujeres para el fortalecimiento de los partidos políticos. Una guía de buenas prácticas para promover la participación política de las mujeres, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Instituto Nacional Demócrata, 2011, Pág.41.

DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN	
Brasil	<p>El partido del Movimiento Democrático Brasileño estableció una política interna para incentivar la participación de las mujeres y lanzó la campaña "Mujer: Tome partido". El objetivo fue que los directores del partido tomaran conciencia de la necesidad de contar con candidaturas femeninas. Para lograrlo se elaboró un video el cual fue distribuido a dieciséis estados de la federación.</p> <p>Durante la caravana de la campaña se realizan concursos de capacitación en los que se expone la doctrina del partido, las conquistas alcanzadas y principalmente se incentiva la nueva afiliación de mujeres. Con esta campaña se intentó también identificar a algunas lideresas locales capacitadas para presentar sus candidaturas en las elecciones siguientes.⁵⁰</p>
Colombia	<p>En Colombia, en el marco del Programa Conjunto de género financiado por el Fondo para el logro de los Objetivos del Milenio, se implementó una estrategia de comunicación educativa con un enfoque en masculinidades que llegó a múltiples poblaciones, desde funcionarios públicos, organizaciones de la sociedad civil, hasta un público más amplio a través de una campaña en medios de comunicación masiva.</p> <p>En el marco de la campaña y bajo el eslogan "Nos Toca", voceros hombres y personajes reconocidos a nivel nacional, realizaron piezas comunicativas contra la violencia basada en género. De esa forma, se promovieron masculinidades no violentas comprometidas con el cambio y la transformación social e institucional de los estereotipos de género, sacando el problema de la violencia basada en género de la esfera privada y llevándolo al debate público.⁵¹</p>
Ecuador	<p>Con el fin de difundir el pensamiento de las mujeres en general y su opinión en relación con temas políticos de diversa índole, durante el año 2005 un grupo de mujeres dirigentes del partido Democracia Popular en Ecuador apostó por la publicación de un periódico editado cada 45 días y con un tiraje de dos mil ejemplares.</p> <p>La publicación contaba con:</p>

⁵⁰Llanos Beatriz, Kristen Sample, Del dicho al hecho, manual de buenas prácticas para la participación de mujeres en los partidos políticos latinoamericanos, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Perú, 2008, Pág. 35.

⁵¹Gómez, Lina Cristina, Estudio de caso: Estrategia de Comunicación Educativa del Programa Integral contra Violencias de Género de Colombia del MDG-F. ONU Mujeres Colombia, consultado en Lecciones aprendidas y Buenas prácticas, Informe Final Evaluación temática regional sobre participación política de las mujeres en América Latina y el Caribe 2011-2014 ONU Mujeres Oficina Regional para las Américas y el Caribe (ACRO), Chile, 2014. Pág. 12.

DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN	
	<p>Una sección editorial destinada a expresar la posición ideológica de las mujeres democristianas. Un espacio para presentar a mujeres del partido que ocupan cargos, fundamentalmente de elección popular.</p> <p>Relatos acerca de personajes históricos femeninos activos en el mundo político. Una sección informativa sobre los derechos de las personas. Un segmento cultural.</p> <p>Para contrarrestar la aridez de los temas políticos, el periódico utilizó un formato, tipos de letra, colores y diagramación atrayentes. Se buscó, además, un nombre incluyente: SOMOS con visión de género.</p> <p>Asimismo, se logró una importante distribución al interior del partido mediante el envío de ejemplares a las directivas provinciales, pero también se envió a no militantes y, sobre todo, se repartió entre los hombres del partido.⁵²</p>
Reino Unido	<p>El Partido Conservador creó el Women2Win (“mujeres para ganar”) que incluye un sitio web del mismo nombre, el cual ha desempeñado un papel activo en la incorporación de nuevas afiliadas y en la provisión de la formación, el asesoramiento y el apoyo que las afiliadas necesitan para triunfar en el partido.⁵³</p> <p>Women2Win lidera la campaña para elegir a más mujeres conservadoras al Parlamento con el apoyo de una amplia muestra representativa de hombres y mujeres del Partido Conservador.</p> <p>Su misión es garantizar que el Partido Conservador represente a las mujeres en todos los niveles de la política. Women2Win tiene como objetivo aumentar el número de mujeres conservadoras en el Parlamento y en la vida pública, y se compromete a identificar, capacitar y asesorar a las candidatas para cargos públicos.</p> <p>En 2005 había solo 17 mujeres parlamentarias conservadoras, que representaban solo el 9% del partido parlamentario. En 2018, después de trece años y tres elecciones, hay 67 mujeres parlamentarias conservadoras, que es más del 20%. También asisten a mujeres de alto nivel que buscan nombramientos públicos, así como a concejales, oficiales de asociaciones y comisionados de policía.⁵⁴</p>

⁵²Llanos, Beatriz & Sample Kristen, Del dicho al hecho: manual de buenas prácticas para la participación de mujeres en los partidos políticos latinoamericanos. Idea Internacional, 2008, consultado en Recuperado de <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/del-dicho-al-hecho.pdf>

⁵³ Empoderando a las mujeres para el fortalecimiento de los partidos políticos. Una guía de buenas prácticas para promover la participación política de las mujeres, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Instituto Nacional Demócrata, 2011, Pág. 33.

⁵⁴Women2win, consultado en <https://www.women2win.com/about-us>, 19 de junio de 2018.

DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN	
Uruguay	<p>El Partido Político Encuentro Progresista-Frente lanzó la campaña “Si la mujer no está, la democracia no va”. El objetivo de la actividad era dar visibilidad a las mujeres candidatas y comunicar su agenda como mujeres políticas de izquierda a los medios de comunicación y el electorado.</p> <p>Los principales temas de su agenda fueron:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La jerarquización del Instituto Nacional de la Familia y la Mujer. 2. La aplicación de un Plan Nacional de Oportunidades y Derechos, de un Plan Nacional de Prevención de la Violencia Doméstica y del Plan de Igualdad de Trato y Oportunidades en el Empleo. 3. El reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. 4. El cumplimiento de los compromisos acordados por el país en foros y conferencias internacionales relativos a los derechos de las mujeres. <p>Esta actividad logró dar una mayor visibilidad a las candidatas en la campaña electoral e incrementó la divulgación de sus propuestas programáticas. Así mismo, ayudó a posicionar a las mujeres como actoras políticos autónomos, con una agenda propia de relevancia para el electorado y para los contenidos de la campaña electoral, lo que a su vez puede servir para contrarrestar la utilización estereotipada de las candidaturas femeninas por las comisiones electorales partidarias o las agencias contratadas para hacer la publicidad electoral.⁵⁵</p>

OTRAS BUENAS PRÁCTICAS	
Australia	<p>En Australia, el Partido Laborista ha establecido un programa de asesoramiento en el cual las candidatas primerizas se emparejan con políticas más experimentadas con este mismo propósito.</p> <p>El objetivo de las sesiones de capacitación del Partido Laborista Australiano es incrementar las habilidades de las mujeres en la realización de campañas, el manejo mediático, la oratoria y el manejo de los procedimientos para realizar reuniones. Asimismo, crearon la Organización Laborista de Mujeres y la Conferencia de Mujeres cuyos objetivos son: a) fomentar los objetivos, métodos y plataforma del Partido; b) promover la organización de las mujeres en el Partido; c)</p>

⁵⁵Llanos, Beatriz & Sample Kristen, Del dicho al hecho: manual de buenas prácticas para la participación de mujeres en los partidos políticos latinoamericanos. Idea Internacional, 2008, consultado en Recuperado de <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/del-dicho-al-hecho.pdf>

OTRAS BUENAS PRÁCTICAS	
	<p>educar a las mujeres política e industrialmente; d) promover programas de acción afirmativa a favor de las mujeres, y e) apoyar la selección y elección de mujeres candidatas a cargos públicos.⁵⁶</p> <p>Asimismo, Australia ha establecido cuotas internas de los partidos y redes de recaudación de fondos para promover el avance de las mujeres en política.⁵⁷</p>
Bahréin	<p>Las mujeres de Bahréin ganaron el derecho a votar y ser votadas en 2002.</p> <p>A través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se consideraron diversos mecanismos de financiamiento para apoyar a las candidatas que se postulaban en las elecciones de 2006, tales como la creación de incentivos económicos para las asociaciones políticas (en Bahréin no hay partidos políticos) dirigidos a elevar el número de candidatas a puestos de elección popular.</p> <p>Con las acciones implementadas tuvieron como resultado que dieciocho mujeres estuvieran entre las 220 candidaturas que participaron en elecciones parlamentarias y cinco mujeres contendieron en elecciones municipales.</p> <p>Sólo una mujer resultó electa para el Parlamento, quien al convertirse en la primera parlamentaria, marcó un precedente histórico.⁵⁸</p>
Canadá	<p>La Ley Electoral de 1974 de Canadá permite que se incluyan los gastos para el cuidado de los hijos en los gastos personales de campaña de las candidatas, aunque no para el proceso inicial de nominación.</p> <p>La Real Comisión de Canadá, destacando la carga desigual de cuidar a los hijos e hijas que pesa sobre la mayoría de las mujeres, ofreció una deducción de impuestos para los gastos relacionados con la candidatura.</p> <p>Para algunas mujeres, los gastos de campaña serían iguales a los de los candidatos; sin embargo, un estudio efectuado en Canadá encontró que las candidatas mujeres gastaron aproximadamente 10 por ciento más que los hombres. Esta diferencia en los índices de</p>

⁵⁶ I Know Politics, Red Internacional de Información sobre Mujeres y Política, Las mejores prácticas utilizadas por los partidos políticos para promover la participación de las mujeres en política, Pág. 6

⁵⁷ Empoderando a las mujeres para el fortalecimiento de los partidos políticos. Una guía de buenas prácticas para promover la participación política de las mujeres, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Instituto Nacional Demócrata, 2011, Pág. 33.

⁵⁸, 2007, Pág. 21.

OTRAS BUENAS PRÁCTICAS	
	<p>gastos efectuados por los candidatos y las candidatas refleja diferencias en las funciones de género, tales como los costos en que incurren las mujeres para compensar las responsabilidades que tienen de cuidar a los hijos y del hogar, así como la necesidad de gastar más que los hombres, en un esfuerzo para contrarrestar las impresiones negativas acerca del potencial de las mujeres para actuar eficazmente en la política.⁵⁹</p> <p>Por otro lado, en el Partido Liberal de Canadá se creó un comité de selección de candidatas y candidatos para garantizar que hubiera diversidad en la selección y que se cumplieran las reglas concernientes a la inclusión de candidatas.⁶⁰</p> <p>En Canadá, el Partido Liberal estableció el Fondo Judy LaMarsh, que es un mecanismo para recaudar y gastar dinero en favor de mujeres candidatas para ayudarlas a que sean elegidas para el parlamento. El Partido Liberal tiene control directo sobre cómo se gasta el dinero y qué mujeres candidatas tienen prioridad para recibir fondos. El Fondo debe trabajar teniendo en cuenta la normativa de financiación de partidos de Canadá, y recauda dinero fundamentalmente a través de eventos y envíos directos por correo e internet.⁶¹</p>
Estados Unidos	<p>En Estados Unidos surgió la iniciativa EMILY'S LIST ("El dinero anticipado es como la levadura") por sus siglas en inglés, que es una red que mejora el acceso a financiación para mujeres progresistas demócratas en la política estadounidense. Dado que las mujeres no estaban obteniendo los capitales iniciales necesarios para sus campañas para ser tomadas en serio como candidatas competitivas contra los hombres, la lista de EMILY ha ofrecido acceso a dinero anticipado, ya que "el dinero anticipado hace que la masa (esto es, los fondos de campaña) crezca".⁶²</p>
El Salvador	<p>El Salvador creó una Estrategia de financiamiento para promover candidaturas femeninas. Esta práctica permitió generar fondos para hacer frente a uno de los obstáculos que enfrentan las mujeres en la política: insuficiente acceso a recursos y financiamiento para promover liderazgo. La estrategia fue desarrollada en 1997 por mujeres parlamentarias del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) con la finalidad de visibilizar a las mujeres candidatas que participaron en la contienda electoral de ese año. Las impulsoras</p>

⁵⁹ Ibidem, Pág. 20.

⁶⁰ Empoderando a las mujeres para el fortalecimiento de los partidos políticos Una guía de buenas prácticas para promover la participación política de las mujeres, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Instituto Nacional Demócrata, Instituto Nacional Demócrata, 2011, Pág. 24

⁶¹ Ibidem, Pág. 28.

⁶² Idem.

OTRAS BUENAS PRÁCTICAS	
	<p>identificaron que el presupuesto asignado para campañas electorales significaba desventajas para las mujeres candidatas a diputaciones y concejos municipales, por lo que crearon un Plan de recolección de Fondos para impulsar candidaturas femeninas. El Plan implicó la creación del Comando Femenino de Finanzas, Comunicación y Apoyo al Liderazgo.</p> <p>El Comando se integró por 5 mujeres del FMLN “<i>con reconocimiento nacional, que no nos soborna nadie, que trabajamos con todas</i>”⁶³ quienes elaboraron una lista de personas empresarias y bancarias a quienes solicitaron apoyo para financiar campañas de mujeres candidatas⁶⁴. De manera paralela, otro grupo de mujeres solicitó apoyo a compatriotas radicados en el exterior. La estrategia permitió reunir un total de 22 mil 875 dólares que se invirtió en la revista <i>Poder Femenino</i>, así como en la impresión y difusión de afiches publicitarios que promocionaron a mujeres candidatas en todo el país.</p> <p>Se ha considerado una buena práctica en virtud de que implicó reconocer y hacer frente a una de las desventajas que persiste en el ejercicio político y parlamentario para promover el liderazgo de las mujeres, muestra que el compromiso con la igualdad de género puede derivar en movilizaciones con capacidad para atraer recursos que permitan hacer frente a los obstáculos que colocan a las mujeres es una situación de desventaja para hacer política con respecto a los hombres.⁶⁵</p>
México	<p>En 2010, se creó la Iniciativa SUMA, Democracia es Igualdad, tuvo una duración de cuatro años y fue financiada por el Fondo de Igualdad de Género de ONU Mujeres y por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).</p> <p>La finalidad fue incidir en el incremento de la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión, sobre todo en los puestos de elección en los distintos órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), promoviendo simultáneamente una agenda para el empoderamiento económico de las mujeres.⁶⁶</p>

⁶³ García, Isabel, “Financiamiento político y perspectiva de género”, *De las normas a las buenas prácticas, El desafío del financiamiento político en América Latina*. Griner, Steven y Zovatto, Daniel (Ed.). OEA e International IDEA, San José. 2004.

Llanos, Beatriz & Sample Kristen, Del dicho al hecho: manual de buenas prácticas para la participación de mujeres en los partidos políticos latinoamericanos. Idea Internacional, 2008, consultado en Recuperado de <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/del-dicho-al-hecho.pdf>

Palmieri, Sonia Parla mentos sensibles al género. Una reseña global de buenas prácticas, Unión Inter Parlamentaria, Rapports et documents N° 64, 2011, consultado en <http://archive.ipu.org/pdf/publications/gsp11-s.pdf>

⁶⁴ En el caso de México, la legislación prohíbe las aportaciones de personas morales a partidos y candidatos; sin embargo, la estrategia puede dirigirse a personas físicas.

⁶⁵ Idem.

⁶⁶ Iniciativa Suma, Democracia es Igualdad una Ruta Mexicana de Aprendizaje Compartido 2010-2014, ONU Mujeres, México, 2014, Pág. 6.

OTRAS BUENAS PRÁCTICAS	
	<p>El modelo de intervención que plantea Iniciativa SUMA cuenta con tres ejes transversales, los cuales son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incidencia política: se enfocó en movilizar y sumar apoyos de la ciudadanía, de las y los líderes, de las instituciones del Estado, de partidos políticos, la academia y de las organizaciones de mujeres, es decir, de todos los actores involucrados en la promoción de la democracia paritaria. Este eje contribuye a que se articulen los acuerdos y se sumen las voluntades desde la pluralidad política y la diversidad social. • Comunicación y difusión: la comunicación del modelo se ha enfocado en la formación de una opinión pública favorable a la participación de las mujeres y a la agenda de empoderamiento económico, así como en visibilizar a las mujeres políticas y sus agendas. • Sistematización, evaluación y monitoreo: capacidad de integrar desde un inicio aspectos de monitoreo, sistematización y evaluación, y de utilizarlos para alimentar procesos de mejora continua. El modelo se sustenta en la elaboración de indicadores y metas por cada componente de intervención.⁶⁷ <p>Las buenas prácticas de la Iniciativa SUMA se pueden resumir de la siguiente forma:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Incidir directamente en las y los tomadores de decisiones, por medio de un ejercicio para promover el respeto y la protección de los derechos políticos y económicos de las mujeres a través de sumar las voluntades de una diversidad grande de actores políticos. b) Un programa de formación para brindar conocimientos, habilidades y competencias para avanzar con igualdad de oportunidades en el ámbito de la participación política, así como ofrecerles herramientas para que desarrollen iniciativas que apunten a lograr el empoderamiento económico de las mujeres a las que representan o de la comunidad sociopolítica que atienden desde el servicio público.

⁶⁷Idem, Pág.12.

OTRAS BUENAS PRÁCTICAS	
	<p>c) Sesiones de mentoría que consisten en proporcionar asesorías individualizadas de forma periódica y sistemática a las mujeres que tienen altas posibilidades de acceder a espacios de toma de decisión en un plazo corto.⁶⁸El objetivo es aplicar de forma práctica los conocimientos, habilidades y competencias que adquirieron en el Programa de formación para avanzar en el ámbito de la participación política.</p> <p>d) Asesoría Jurídica para proporcionar herramientas técnico-jurídicas, a fin de que dispongan de los elementos necesarios para defender sus derechos políticos. SUMA no se hizo cargo de las defensas individuales, pero sí ofreció a las mujeres información con respecto al camino a seguir en función del marco legal vigente y las asesoró para que conocieran los instrumentos jurídicos a su alcance.</p> <p>e) El modelo ofreció información sobre desigualdad y discriminación contra las mujeres en el ámbito económico; formación sobre el marco internacional de derechos humanos relativos al empoderamiento económico de las mujeres, y sobre los acuerdos globales, regionales y nacionales que garantizan el ejercicio de sus derechos.</p> <p>f) Cuenta con página web, así como con redes sociales Twitter y Facebook, las cuales permanecen actualizadas con información relevante para las mujeres políticas.</p> <p>g) Se elaboró un boletín semanal llamado “SUMA Informa”, que es enviado por medio de la base de datos a todas las mujeres que han sido beneficiarias del modelo en todo el país y a todas aquellas personas con las que SUMA ha tenido relación.</p> <p>h) Se impulsaron acuerdos con los sistemas de radio y televisión públicas, tanto a nivel federal como local, para transmitir materiales propios de SUMA, como cápsulas de radio y de televisión.</p> <p>i) Algunos de esos materiales han sido traducidos a lenguas indígenas.</p>

⁶⁸ Ibidem, Pág.13.

OTRAS BUENAS PRÁCTICAS	
	<p>j) Al finalizar la implementación del modelo, se realizaron dos encuentros de mujeres políticas, militantes de partidos, legisladoras, participantes en espacios de decisión, académicas estudiosas del tema de los derechos políticos de las mujeres e integrantes de la sociedad civil ligados a los objetivos de la Iniciativa con el fin de responder durante el primer encuentro: "Tú, yo, nosotras ¿dónde estamos?" y durante el segundo: "Tú, yo, nosotras... ¿hacia dónde vamos?".</p> <p>k) Derivado de estos encuentros se pretendía lograr propuestas para reformular políticas públicas y proponer cambios legislativos y diseñar nuevas estrategias de empoderamiento para las mujeres interesadas en el quehacer político.</p> <p>La iniciativa SUMA benefició a 5,000 mujeres políticas, provenientes de todos los partidos políticos, de más de 600 municipios por medio de sus distintas estrategias, de las cuales 1,600 (incluidas mujeres indígenas) fortalecieron sus capacidades y habilidades de liderazgo mediante la capacitación profesional y las mentorías personalizadas para contender a puestos de elección popular.⁶⁹</p>
México	<p>En el ejercicio 2012, con el fin de reconocer la experiencia que adquirieron los partidos políticos nacionales al programar por primera vez el gasto destinado a la CPDLPM, la entonces Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos (UFRPP) del otrora Instituto Federal Electoral, junto con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, convocaron a los 7 partidos políticos nacionales para participar en el "PREMIO PROYECTO PAT 2012. Programando el gasto destinado a mujeres para el liderazgo político."</p> <p>Cada proyecto debió registrarse de forma gratuita mediante la cedula contenida en la convocatoria y enviarse a la entonces UFRPP; posteriormente, un jurado compuesto por académicos/as de la UNAM, personas expertas en los temas de género, fueron las y los responsables de evaluar los proyectos, desde el aspecto de si cumplían o no, con el objetivo de generar conocimientos, habilidades y actitudes de adelanto en las mujeres para el ejercicio político, tomando en consideración los aspectos de calidad, eficacia, impacto y productos o resultados obtenidos.</p> <p>El premio consistió en reconocer a los 7 proyectos más destacados mediante:</p>

⁶⁹ Iniciativa Suma, Democracia es igualdad, Una ruta mexicana de aprendizaje compartido 2010-2014, ONU Mujeres, México, 2014, Pág. 8.

OTRAS BUENAS PRÁCTICAS			
	<ul style="list-style-type: none"> • Medalla para los primeros tres lugares • Mención honorífica • Difusión de los elementos evaluados a través del micrositio Género y Democracia <p>Como resultado del concurso, el jurado determinó que ninguno de los proyectos presentados cumplió plenamente con la totalidad de los criterios a evaluar, por lo que decidió dejar desierto el 1er. lugar, así como los lugares 5º al 7º, quedando la premiación de la manera siguiente:</p>		
	Lugar	Nombre del proyecto	Descripción del proyecto
	1	Desierto	-
	2	"B2 PROYECTO2"	Diseño y elaboración de contenidos y materiales del sistema de educación para la implementación del PAT dirigido a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, y un plan editorial
	3	Formación política y conciencia de género	Videotecas especializadas en la materia
		Liderazgo, igualdad de género y derechos humanos en México: por la participación política de las mujeres	
	4	FORO: Objetivo de desarrollo del Milenio	Programa anual para la capacitación y formación del liderazgo político de las mujeres
	5	Desierto	-
	6	Desierto	-
	7	Desierto	-

LISTA DE ACRÓNIMOS

TERMINO	CONCEPTO
AE	Actividades Específicas
CEDAW	Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
CPEUM	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
CPDLPM	Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres
INE	Instituto Nacional Electoral
INDAUTOR	Instituto Nacional del Derecho de Autor
LGIPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
LGPP	Ley General de Partidos Políticos
PAT	Programa Anual de Trabajo
RF	Reglamento de Fiscalización
SIF	Sistema Integral de Fiscalización
TEPJF	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
UTF	Unidad Técnica de Fiscalización
UTIGyND	Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación

ANEXO 1⁷⁰

ENTIDAD/ÁMBITO	PORCENTAJE MÍNIMO QUE DEBE DESTINARSE PARA LA CPDLPM
Nacional	3%
Aguascalientes	3%
Baja California	3%
Baja California Sur	5%
Campeche	3%
Chiapas	6%
Chihuahua	3%
Ciudad de México	5%
Coahuila	3%
Colima	3%
Durango	3%
Estado de México	3%
Guanajuato	3%
Guerrero	5%
Hidalgo	5%
Jalisco	3%
Michoacán	3%
Morelos	3%
Nayarit	3%
Nuevo León	3%
Oaxaca	3%
Puebla	3%
Querétaro	5%
Quintana Roo	3%
San Luis Potosí	5%
Sinaloa	5%
Sonora	3%
Tabasco	3%
Tamaulipas	3%
Tlaxcala	3%
Veracruz	3%
Yucatán	25% ⁷¹
Zacatecas	5%

⁷⁰Montos actualizados al mes de abril de 2018.

⁷¹El artículo 52, fracción III, inciso b) de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán establece que, para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, con base en un programa anual, cada partido político deberá garantizar y destinar anualmente al menos el 25 % del financiamiento para actividades específicas.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del Consejo. _____

Señoras y señores Consejeros y representantes, se han agotado los asuntos del orden del día, se levanta esta sesión. Buenas tardes. _____

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 18:17 horas. _____

La presente Acta fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 28 de noviembre de dos mil dieciocho, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. _____

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**